COMISIÓN DE
DERECHOS HUMANOS DEL
ESTADO DE ZACATECAS

GACETA OFICIAL

Órgano de Difusión Oficial de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas

PUBLICACIÓN SEMESTRAL
EDICIÓN NO. 27, JULIO - DICIEMBRE 2021

GACETA OFICIAL

Órgano de Difusión Oficial de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas

GACETA OFICIAL



DIRECTORIO

Dra. en D. Ma. de la Luz Domínguez Campos
Presidenta

Lic. Mayra Griselda Ruvalcaba Moreno
Secretaria Ejecutiva

CONSEJO CONSULTIVO

Lic. Estela Berrún Robles
Q.F.B. Karla Guadalupe Escamilla Rodríguez
Lic. Félix Vázquez Acuña
Dra. en H. Ma. del Rosario Arellano Valadez
Lic. José Manuel Félix Chacón
Dra. en D. Susana Martínez Nava
Lic. María Isabel González

EDICIÓN

M. en C. María José Zapata Padilla

INTEGRACIÓN

M. en M. Guadalupe del Pilar Arce Ramírez
M. en A. Estefanía Herrera Villegas

GACETA OFICIAL

Órgano de Difusión Oficial de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas

Presentación

Índice

Editorial

I. Presidencia 11

I. 1. Actividades de Presidencia 11

I.2. Vinculación con Instituciones Públicas 12

I.2.1. Federación Iberoamericana del Ombudsman 12

I.2.1.1. La FIO designa a la Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos como Coordinadora de la Red sobre Movilidad Humana antes conocida como Red de Migrantes y Trata de Personas 12

I.2.1.2. Pronunciamiento de la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO) sobre crisis de personas refugiadas y desplazamientos forzados en América Latina y El Caribe 14

I.2.2. Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos 17

I.2.2.1. Las autoridades deben representar a todas las personas: Ombudsperson 17

I.2.2.2. La CDHEZ se une al llamado de la FMOPDH a garantizar el derecho a la salud integral de niñas, niños y adolescentes 20

I.2.2.3. Participa Domínguez Campos en el LIV Congreso Nacional de la FMOPDH 22

I.2.3. Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) 24

I.2.3.1. Se reúne CDHEZ y CNDH con Cónsules y autoridades del SEDIF, INM y SSP para revisar la política y acciones en materia migratoria 24

1.2.4. Comisiones de Derechos Humanos de otros estados 27

I.2.4.1. Llama CDHEZ, CDHJ, CEDHD y la protección de las comunidades indígenas 27

I.2.5. Poder Ejecutivo del Federal 29

I.2.5.1. La CDHEZ impulsa capacitación por parte del Mecanismo para Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la SEGOB 29

1.2.6. Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas 30

I.2.6.1. Necesario un Plan Estatal de Desarrollo con enfoque de Derechos Humanos: Domínguez Campos 30

I.2.6.2. La CDHEZ reconoce a Colectivos de Personas Desaparecidas con el Premio de Derechos Humanos "Tenamaxtle 2021" 33

I.2.6.3. La CDHEZ y la Defensoría Pública signan Convenio de Colaboración 36

I.2.6.4. Llama Ombudsperson a darle valor a la opinión de niñas, niños y adolescentes 38

I.2.6.5. Lamentable que en pleno siglo XXI continúe la discriminación a las mujeres: Ombudsperson 40

1.2.7. Poder Legislativo del Estado de Zacatecas 42

I.2.7.1. La Ombudsperson se reúne con las y los diputados para el análisis del presupuesto 2022 de la CDHEZ 42

I.2.7.2. La Dra. Ma. de la Luz Domínguez asiste a la instalación de la Comisión legislativa de Derechos Humanos 44

I.2.7.3. Propone Ombudsperson legislar en favor de los Grupos en Situación de Vulnerabilidad 46

I.2.7.4. Solicita Ombudsperson revisar el marco jurídico para reconocer a NNA como sujetos plenos de derechos 48

I.2.7.5. Domínguez Campos invita a las y los legisladores a hacer frente común por los Migrantes 50

I.2.7.6. Participación Ciudadana fundamental para la construcción de una sociedad democrática: Ombudsperson 52

I.2.8. Organismos Autónomos 53

II.2.8.1. La CDHEZ llama a las autoridades a implementar acciones en favor de las mujeres 53

I.2.8.2. CDHEZ Rinde homenaje a Tenamaxtle 55

I.2.9. Ayuntamientos de Zacatecas 57

I.2.9.1. La Presidenta de la CDHEZ asiste a la celebración de Matrimonios Colectivos en la Capital de Zacatecas 57

I.2.9.2. La CDHEZ realiza Foro Planeación Democrática Municipal con perspectiva de Derechos Humanos 58

I.2.9.3. La CDHEZ realiza Taller para el Diseño del Plan Municipal de Desarrollo y Elaboración de Indicadores y Evaluación 62

I.2.9.4. Ombudsperson exhorta a Presidentes(as) Municipales a garantizar mejores condiciones laborales a policías 65

I.2.9.5. La CDHEZ Y el Ayuntamiento de Guadalupe refrendan compromiso por los derechos humanos 67

I.2.9.6. Firman convenio la CDHEZ y el Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas 69

I.2.10. Instituciones educativas 71

I.2.10.1. La CDHEZ y la UNID Zacatecas firman convenio de colaboración 71

I.2.10.2. La violencia de género puede y debe prevenirse: Presidenta de la CDHEZ 73

I.2.11. Vinculación con la Sociedad Civil 74

I.2.11.1. Participa Ombudsperson en la jornada de trabajo “Sigamos por la Ruta, hacia una Ley Nacional de Trabajo Social” 74

I.2.11.2. Revisa Ombudsperson medidas para prevenir COVID-19 con sector empresarial 76

I.2.11.3. Participa Domínguez Campos en la entrega del Premio Gachita Amador 78

I.2.11.4. La CDHEZ presenta el mural "Ausencia", en homenaje a las personas desaparecidas 80

I.2.11.5. Lamentable que se violente la dignidad humana de los migrantes: Domínguez Campos 84

I.2.11.6. La CDHEZ convoca a participar en el Distintivo de Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad 2021 87

I.2.11.7. La CDHEZ convoca al Premio de Estatal de Derechos Humanos "Tenamaxtle 2021" 88

I.2.11.8. Convocan al Concurso de Cortometraje, Dibujo y Cuento del Festival de Arte, Inclusión y Cultura de Paz 2022 90

I.2.11.9. Marcha la CDHEZ en el marco del Día Mundial del SIDA 92

I.2.11.10. La CDHEZ capacita a periodistas sobre "Recursos de protección para periodistas" 94

II. Protección y Defensa de los Derechos Humanos 96
II.1. Expedientes del segundo semestre de 2021 98
II.1.1. Asesorías 98
II.1.1.1. Asesorías clasificadas por materia 98
II.1.1.2. Asesorías clasificadas por materia y sexo 99
II.1.1.3. Asesorías clasificadas por grupo etario 101
II.1.1.4. Asesorías clasificadas por grupos etario y sexo 102
II.1.1.5. Asesorías clasificadas por región 104
II.1.1.6. Asesorías clasificadas por mes de recepción 105
II.1.1.7. Asesorías clasificadas por tipo de recepción 106
II.1.2. Gestiones 107
II.1.2.1. Gestiones generales 107
II.1.2.2. Gestiones durante la Sustanciación de Expedientes 125
II.1.2.3. Gestiones relacionadas con casos de Coronavirus (COVID-19) 134
II.1.3. Quejas recibidas 136
II.1.3.1 Quejas recibidas durante el Segundo Semestre del año 2021 136
II.1.3.2. Quejas recibidas por sexo 137
II.1.3.3. Quejas recibidas por grupo etario 138
II.1.3.4. Quejas recibidas por grupo etario y sexo 139
II.1.3.5. Quejas recibidas por Visitaduría 140
II.1.3.6. Quejas penitenciarias 142
II.1.3.7. Quejas penitenciarias, clasificadas por autoridades presuntas infractoras 142
II.1.4. Sustanciación y Resolución de Expedientes 144
II.1.4.1. Conclusión de Expedientes 144
II.1.4.1.1. Quejas concluidas de expedientes del año 2021, clasificadas por tipo de resolución 144
II.1.4.1.2. Quejas concluidas de expedientes del Segundo Semestre del año 2021, clasificadas por tipo de resolución y año de recepción 145
II.1.5. Resoluciones 146
II.1.5.1. Recomendación 35/2021 147
II.1.5.2. Recomendación 36/2021 182
II.1.5.3. Recomendación 37/2021 198
II.1.5.4. Recomendación 38/2021 239
II.1.5.5. Recomendación 39/2021 263
II.1.5.6. Recomendación 40/2021 291
II.1.5.7. Recomendación 41/2021 330

II.1.5.8. Recomendación 42/2021 372
II.1.5.9. Recomendación 43/2021 401
II.1.5.10. Recomendación 44/2021 422
II.1.5.11. Recomendación 45/2021 435
II.1.5.12. Recomendación 46/2021 473
II.1.5.13. Recomendación 47/2021 507
II.1.5.14. Recomendación 48/2021 540
II.1.5.15. Recomendación 49/2021 564
II.1.5.16. Recomendación 50/2021 596
II.1.5.17. Recomendación 51/2021 617
II.1.5.18. Recomendación 52/2021 664
II.1.5.19. Recomendación 53/2021 702
II.1.5.20. Recomendación 54/2021 774
II.1.5.21. Recomendación 55/2021 807
II.1.5.22. Recomendación 56/2021 837
II.1.5.23. Recomendación 57/2021 863
II.1.5.24. Recomendación 58/2021 894
II.1.5.25. Recomendación 59/2021 926
II.1.5.26. Recomendación 60/2021 960

III. Promoción de Derechos Humanos en el Estado 1025

III.1. Acciones de Promoción y Difusión durante el segundo semestre del año 2021 1029

III.1.1. Personas Capacitadas 1029
III.1.2. Actividades de capacitación efectuadas en municipios 1030
III.1.3. Servidores públicos capacitados por la CDHEZ 1032
III.1.4. Capacitaciones a instituciones educativas de nivel preescolar 1055
III.1.5. Capacitaciones a instituciones educativas de nivel primaria 1056
III.1.6. Capacitaciones a instituciones educativas de nivel secundaria 1056
III.1.7. Capacitaciones a instituciones educativas de nivel preparatoria 1059
III.1.8. Capacitaciones a Jóvenes de Profesional 1061
III.1.9. Capacitaciones a Madres y Padres de Familia 1063
III.1.10. Capacitaciones a Grupos Vulnerables 1064
III.1.11. Capacitaciones a Grupos de la Sociedad Civil 1066

III.2. Difusión de los derechos humanos en medios de comunicación 1067
III.2.1. Infografías, Videografías y GIF 1067
III.2.2. Derechos humanos difundidos en los contenidos de las publicaciones de las redes sociales institucionales 1069
III.2.3. Cápsulas de radio 1070
III.2.4. Cápsulas de Video 1072
III.2.5. Campañas de difusión 1080
III.2.6. Información enviada a los Medios de Comunicación Social 1083
IV. Observancia de los Derechos Humanos en el Estado 1085
IV.1.1. Sistema Penitenciario 1088
IV.1.1.1 Supervisión Penitenciaria a Centros de Reinserción Social en el Estado 1089
IV.1.1.2. Supervisión a los Establecimientos Penitenciarios Distritales de Reinserción Social y al Centro de Internamiento y Atención Integral Juvenil (CIAIJ) 1089
IV.1.1.3. Capacidad instalada, población y sobrepoblación penitenciaria en el estado de Zacatecas 1090
IV.1.1.4. Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 1092
IV.1.1.5. Comparativo del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria de los años 2006 al 2020 1092
IV.1.1.6 Evaluación General del Estado de Zacatecas en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 1093
IV.1.2. Atenciones penitenciarias 1095
IV.1.2.1. Asesorías Penitenciarias 1095
IV.1.2.2. Gestiones penitenciarias 1096
IV.1.2.3. Incidentes violentos en los Centros y Establecimientos Penitenciarios de Reinserción Social en el año 2021 1100
IV.1.2.4. Muertes causadas por COVID-19 en centros penitenciarios de la entidad 1101
IV.1.2.5.Contagiados, Recuperados y Muertes de personas privadas de la libertad causadas por COVID-19 en centros y establecimientos penitenciarios de la Entidad 1102
IV.1.3. Supervisión a separos preventivos realizada durante 2021 1103
IV.1.4. Número de policías preventivos en el Estado de Zacatecas en el segundo semestre del año 2021 1107
IV.1.5. Acompañamiento a familiares de víctimas de personas desaparecidas 1109
IV.1.6. Registro de Fosas Clandestinas en el Estado 1110
IV.1.7. Supervisiones a Instituciones públicas y privadas 1112
IV.1.7.1. Supervisiones a casas institucionalizadas para personas adultos mayores 1112
IV.1.7.2. Supervisiones a casas institucionalizadas para Niños, Niñas y Adolescentes 1113

IV.1.7.3. Supervisiones a instituciones de atención a mujeres víctimas de violencia 1114
IV.1.7.4. Supervisión a Centros de Tratamiento y Rehabilitación de Adicciones en el Estado 1115
IV.1.7.4 Supervisión a la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración 1118

V. Convenios de Colaboración 1121

Editorial

Con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 11 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, me permito presentar a ustedes la Gaceta Oficial de este Organismo Público Defensor de los Derechos Humanos, misma que corresponde a su edición número 27 y que comprende el periodo del 1 de julio al 31 de diciembre de 2021.

La presente Gaceta Oficial contiene la información de las actividades institucionales en materia de protección, respeto, defensa, observancia, estudio y divulgación de los derechos humanos. Destacando la celebración de convenios con el objeto de desarrollar actividades de promoción y difusión de los derechos humanos, cultura de la legalidad y cultura de la paz; a través de capacitaciones, diplomados, talleres y foros. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) en el segundo semestre del año signó convenios de colaboración con 38 Ayuntamientos del Estado de Zacatecas y el Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Zacatecas.

El presente Órgano de Difusión de la CDHEZ contiene los datos, cifras, estadísticas e información respecto de las asesorías, gestiones, quejas y resoluciones emitidas, entre las que destacan las recomendaciones. La Gaceta detalla que durante el segundo semestre del año 2021, en el Organismo se aperturaron un total de 1 mil 821 expedientes de los cuales 884 fueron Asesorías, 630 Gestiones y 307 Quejas.

Las personas que acuden a la Comisión, lo hacen en busca de orientación, apoyo institucional y asesoría jurídica, al percibir que sus peticiones, trámites, gestiones o juicios, no reciben el impulso correspondiente de parte de las autoridades. Es en este caso que nuestra Institución cumple la función de interlocutor entre los gobernados y gobernantes.

En el rubro de las asesorías destacan aquellas de tipo administrativas (37.67%), penitenciarias (19.34%), penales (13.12%), familiares (9.84%), laborales (8.48%), psicológicas (6.67%), civiles (2.38%), mercantiles (1.13%), agrarias (1.24%) y ecológica (0.11). Del total de asesorías brindadas 540 fueron a mujeres y 344 a hombres.

En lo relativo a las gestiones, se efectuaron 630, mismas que se realizaron ante instituciones de educación, de salud, de procuración e impartición de justicia, de tránsito, transporte y vialidad; centros de reinserción social y empresas privadas, principalmente.

En el rubro de quejas, durante el periodo que se informa se recibieron 307, de las cuales, las principales voces violatorias fueron: Permitir la ejecución abusiva de facultades que otorga la ley por parte de las autoridades en las relaciones laborales; Lesiones; Ejercicio indebido de la función pública; Derecho a no ser objeto de Detención Arbitraria; Derecho de acceso a la justicia; Dilación o incumplimiento en la procuración de justicia; Violación del Derecho a la Igualdad y al Trato Digno; Derecho a la igualdad y a la no discriminación; Derechos de las personas privadas de su libertad; Violencia sexual y Derecho al debido proceso.

Por su parte, las principales autoridades presuntas infractoras fueron: Policía de Investigación en el Estado; Policías Preventivas Municipales; Fiscales del Ministerio Público; Centro de Readaptación Social Varonil de Cieneguillas Zacatecas; Policía Estatal

Preventiva (PEP); Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); Presidencias Municipales; Agencias del Ministerio Público; Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) y Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ).

Durante el periodo que se informa se concluyeron 398 resoluciones, las cuales correspondieron a quejas presentadas en los ejercicios 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021. De los anteriores expedientes, 7 fueron Incompetencias, 59 Desistimientos, 15 Falta de Interés, 10 Conciliaciones, 86 Quejas solucionadas durante su trámite; 39 Acuerdos de no responsabilidad: 23 Recomendaciones: 38 Quejas remitidas a la CNDH; 3 Faltas de materia, 42 Insuficiencias de pruebas; 17 Quejas no presentadas; 53 Improcedencias; 3 Hechos no constitutivos de violaciones a derechos humanos y 3 remitidas a otra Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas.

Durante el periodo que se informa se emitieron las recomendaciones: 34/2021 35/2021 36/2021 37/2021 38/2021 39/2021, 40/2021, 41/2021, 42/2021, 43/2021, 44/2021, 45/2021, 46/2021, 47/2021, 48/2021, 49/2021, 50/2021, 51/2021, 52/2021, 53/2021, 54/2021, 55/2021, 56/2021, mismas que contienen una serie de puntos recomendatorios para la LXIV Legislatura del Estado de Zacatecas, LXIII Legislatura del Estado de Zacatecas, Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Secretaría de Educación del Estado de Zacatecas, Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Zacatecas, Presidencia Municipal de Villanueva, Presidencia Municipal de Fresnillo, Presidencia Municipal de Loreto, Presidencia Municipal de Zacatecas, Presidencia Municipal de Valparaíso, Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas y Gobernador Constitucional del Estado de Zacatecas.

En materia de Observancia de los Derechos Humanos, durante el periodo que se informa, en este Organismo Defensor de los Derechos Humanos se aperturaron 281 expedientes penitenciarios de los cuales 171 fueron asesorías, 57 gestiones y 53 quejas.

Las asesorías versaron principalmente en: Desarrollo de procedimiento penal y su situación legal, Personas privadas de la libertad en situación vulnerable, Requisitos para obtención de beneficios de ley y gestiones con instituciones.

Las gestiones penitenciarias realizadas, fueron principalmente en materia de salud y jurídicas.

Finalmente, expreso que seguiremos trabajando para que los derechos humanos sean ejercidos por todas las personas en nuestra entidad, sin ningún tipo de discriminación social, económica, jurídica, política, ideológica o cultural. Lo anterior, en virtud a que los derechos humanos son inherentes a la naturaleza y dignidad humana y además, porque estamos convencidos que el respeto, la protección y defensa de los derechos humanos de todas las personas y la vigencia plena del Estado de Derecho, es el único camino para alcanzar la libertad, la justicia, la democracia, la igualdad, el desarrollo y la paz de la sociedad zacatecana.

Dra. en D. Ma. de la Luz Domínguez Campos

Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de Zacatecas

ACTIVIDADES PRESIDENCIA

I.2. Vinculación con Instituciones Públicas

I.2.1. Federación Iberoamericana del Ombudsman

I.2.1.1. La FIO designa a la Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos como Coordinadora de la Red sobre Movilidad Humana antes conocida como Red de Migrantes y Trata de Personas





La Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO) designó durante este 2021 a la Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) como coordinadora de la "Red sobre Movilidad Humana".

La Dra. Ma. de la Luz Domínguez, explicó que la Red temática sobre Migración y Trata de personas de la FIO tiene como finalidad desarrollar investigaciones o informes que permitan promover y proteger los derechos de las personas migrantes, personas en situación de trata de personas y personas en situación de tráfico, así como visibilizar sus necesidades de atención integral y la protección de su vida, integridad y libertad personal.

Domínguez Campos dio a conocer que en esta Red de Defensores de Derechos Humanos se encuentran integrados representantes de Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, España, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela, así como representantes de la Agencia de Cooperación Alemana GIZ, y de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) de Panamá, quienes trabajan de manera articulada para proteger, promover y difundir los derechos de las personas en situación de migración y la lucha contra la trata de personas.

La Ombusperson Zacatecana informó que

mediante la Red sobre Movilidad Humana se establecerá un mecanismo de intercambio de información de la situación de las personas migrantes y sujetas a la protección internacional, así como del análisis del contexto migratorio de América Latina, marcos normativos, situación migratoria, así como temas de tráfico y trata de personas.

Añadió que, de igual forma participa en la actualización del protocolo de actuación de la Federación Iberoamericana del Ombudsman para la protección de los derechos humanos de las personas en contexto de migración.

La titular de la CDHEZ dijo que en la Asamblea de este 2021se presentó el informe de actividades de la Red correspondiente a los años 2020 – 2021, en el cual se compartió el diagnóstico sobre la actuación de los organismos públicos de derechos humanos, señalando que se han agudizado problemas preexistentes ante el contexto por COVID-19: retorno de políticas migratorias restrictivas, rezago en los procesos de regularización migratoria, así como en los procesos de reconocimiento de la condición de refugiado; un aumento en las violaciones al debido proceso durante la detención, deportación y expulsión de las personas, así como en la determinación del interés superior de niñas, niños. La continuidad de la violencia generalizada a la que se enfrenta la población en contextos de movilidad, siendo víctimas de extorsión, secuestro, ejecución, reclutamiento por el crimen organizado, así como el incremento en accione de racismo y xenofobia.

Asimismo, se presentaron los avances de la actualización del “Protocolo para la prevención y respuesta a violaciones o posibles vulneraciones de Derechos Humanos de las personas en contexto de movilidad humana. Cooperación e intercambio transfronterizo”.

La ombudsperson aseveró que la FIO emitió un pronunciamiento en torno a la crisis que la región vive en temas de asilo y desplazamiento forzado interno y los desafíos que los Estados tienen en materia de protección internacional.
Adelantó que para este año 2022, se continuará con el desarrollo del plan de capacitación en el tema de movilidad humana; se celebrará la 4ª Cumbre sobre Movilidad Humana en 2022, se desarrollará una iniciativa para la creación de un Observatorio Regional de Derechos Humanos sobre Movilidad Humana y se extenderá la invitación a todos los miembros de la Red a sumarse a la iniciativa de “Flujos migratorios de América Latina y el Caribe” liderado por el Consejo Centroamericano de Procuradores de Derechos Humanos.

I.2.1.2. Pronunciamiento de la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO) sobre crisis de personas refugiadas y desplazamientos forzados en América Latina y El Caribe

FEDERACIÓN IBEROAMERICANA DEL OMBUDSMAN

El desplazamiento forzoso ha crecido desmedidamente en la región Latinoamericana y el Caribe en los últimos años, tanto factores políticos como económicos, sociales y climáticos han hecho que esta situación se complique debido a una mayor violencia e inseguridad, que obliga a cientos de miles de personas a dejar atrás sus hogares. Hay alrededor de 833,274 personas refugiadas y solicitantes de asilo que provienen de países del norte de Centroamérica. De éstas, la mayoría huyen hacia Costa Rica, México, Belice, El Salvador, Guatemala, Honduras y Panamá. El ACNUR señaló que para 2020, de los aproximadamente 5.4 millones de personas refugiadas y migrantes de Venezuela que estaban fuera de su país de origen, unas 4.6 millones residían en América Latina y el Caribe, es decir, se trata de migración intrarregional.

En el llamado Corredor Seco centroamericano, área geográfica rural que cruza desde México hasta Costa Rica, de acuerdo a estimaciones de 2019, habitan más de 10 millones de personas que llevan al menos dos décadas sufriendo los efectos del cambio climático, lo que se traduce en largos periodos de sequía y temporales de lluvia que castigan las cosechas, se estima que el 80% de sus habitantes sufren de una severa crisis de inseguridad alimentaria y están en el límite de la pobreza extrema, favoreciendo el desplazamiento de miles de personas.

En el contexto de la pandemia por COVID-19, las poblaciones desplazadas se vieron afectadas debido al cierre de fronteras que provocó la crisis, lo que significó para dichas poblaciones la imposibilidad de cruzar las fronteras hacia un lugar más seguro, obligándolas a quedarse por semanas e incluso meses en ciudades fronterizas en condiciones de vida deplorables. Asimismo, aquellas que regresaron a sus lugares de origen se encontraban con tensiones, que se exacerbaban por las crisis económicas y de salud provocadas por la pandemia. Por su parte, en los lugares de destino, las personas

desplazadas se enfrentaban a la continua xenofobia y discriminación que los dejaba aún en mayor situación de vulnerabilidad, así como a dificultades para regularizar su permanencia, debido a las condiciones en las que se vieron obligadas a dejar sus países de origen.

Recientemente hemos visto cómo el perfil del flujo migratorio ha cambiado, si bien antes eran mayormente hombres los que salían de sus países de origen, ahora vemos el aumento de mujeres, algunas de ellas embarazadas, niños, niñas y adolescentes, muchos de ellos solos, familias, adultos mayores, personas de la comunidad LGBTTTIQA+, así como otros grupos vulnerables que huyen de sus países debido a la violencia y las amenazas, entre otros factores que no les dejan otra salida.
De acuerdo al ACNUR, los niños y las niñas representan el 30% de la población mundial, pero son el 42% del total de las personas desplazadas por la fuerza. Además, el 48% de las personas desplazadas son mujeres.

El continente tiene dinámicas de desplazamiento, si bien una buena parte de las movilizaciones se dirigen hacia el norte, también se observa de forma intrarregional y desplazamientos hacia el sur del mismo. Algunos ejemplos de contexto son los siguientes:

En México, se ha registrado un aumento sin precedentes de solicitudes de asilo con respecto a años anteriores, se prevé finalizar el año con 130 mil peticiones; en su mayoría las personas provienen de Haití, Honduras, Cuba, El Salvador, y Venezuela. Por su parte, Haití es un país del que hemos escuchado mucho en los últimos meses, su situación ha obligado a muchas personas a solicitar asilo en otros países y atravesar una buena parte del continente enfrentándose a riesgos y posibles vulneraciones a sus derechos, niñas y niños de padres haitianos han nacido en países de la región, como Chile, Brasil, Panamá por mencionar solo algunos. En Nicaragua, según datos del ACNUR, la crisis política y social ha provocado que desde el 2018, más de 108,000 nicaragüenses hayan abandonado su país, huyendo de la violencia y de las violaciones a los derechos humanos, hacía países vecinos como Costa Rica. O el caso de Ecuador que ha reconocido como refugiados a miles de personas venezolanas. En Paraguay se ha registrado un aumento de personas refugiadas provenientes en su mayoría de Venezuela y Cuba.

Además, constituyen una gran preocupación no sólo de los flujos que se dan en la región sino también de personas extracontinentales que se exponen a grandes riesgos al tomar rutas peligrosas o cruzar de forma irregular las fronteras de países como Perú, Brasil, Ecuador, Colombia o Panamá, así como los riesgos que enfrentan al verse expuestas a redes del crimen organizado del tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas.

Claramente la situación de las personas refugiadas y los desplazamientos forzosos en las Américas y en todo el mundo es un fenómeno que va en aumento; por lo que además de atender las causas estructurales que los motivan, también es necesario contribuir a la defensa, garantía, respeto y protección de las miles de personas que atraviesan o se asientan en la región. En ese sentido la Federación Iberoamericana del Ombudsman, conformada por personas defensoras del pueblo, proveedores, procuradores, comisionados, razonadores y presidentes y presidentas de Comisiones Públicas de Derechos Humanos y Comisiones Estatales de Derechos Humanos, hacemos un llamado para que:

- Los Gobiernos de la Región, tanto a nivel

nacional como local, instauren medidas que garanticen, respeten y protejan a las personas refugiadas y desplazadas en la región, para ello, es necesario que el tema de movilidad humana se trabaje de una forma coordinada a nivel regional que permita mejorar y fortalecer el flujo de información, las buenas prácticas y lecciones aprendidas.

- Se propone que los países implementen acciones concretas para contrarrestar el cambio climático que son una de las causas que motivan los desplazamientos forzosos.
- Garantizar que se cumplan el Principio de la No Devolución (No Refoulement) de quienes buscan la protección internacional, particularmente de niñas, niños y adolescentes y de otros grupos prioritarios, evitando las expulsiones masivas.
- Los Estados deben brindar atención integral a las personas en movilidad, de carácter especializado y diferenciado, atendiendo a su situación de vulnerabilidad y necesidades de protección y, bajo el principio de máxima protección a las personas, estableciendo mecanismos que garanticen efectivamente estancias dignas y seguras en los países de tránsito, destino y acogida.
- Se instauren políticas que favorezcan la inclusión de las personas refugiadas y desplazadas en los países de acogida.
- Se respeté el derecho de los pueblos indígenas y tribales en situaciones de movilidad humana a ser consultados, de manera libre e informada, e incidir de manera efectiva en el proceso de toma de decisiones administrativas y legislativas que los afecten directamente, según lo previsto en Convenio núm. 169 Organización Internacional del Trabajo (OIT).
- El desarrollo de políticas públicas que respeten los derechos humanos de las personas que retornan a su país de origen.
- Se fortalezcan las instituciones de gobierno que atienden las solicitudes de asilo, para que las personas que requieren protección internacional puedan acceder al procedimiento y sus peticiones estén en el marco del más alto estándar de derechos humanos, garantizando el debido proceso.
- Se avance en la construcción y aplicación de la normativa sobre desplazamiento interno forzado, construyendo políticas públicas y programas sociales acordes al más alto estándar de derechos humanos.
- Invitar a los Estados a que se adopten y fortalezcan las medidas y protocolos de actuación dirigidos a niñez y adolescencia no acompañada o separada, para que se garantice el ejercicio de sus derechos de manera integral, la protección especial y la reunificación familiar.
- Exhortar a los Estados para que se adopten y fortalezcan las medidas de prevención, protección, investigación y reparación integral a personas en situación de movilidad humana que han sido víctimas de trata de personas, tráfico de migrantes, secuestro, desaparición, extorsión, violencia basada en género u otras graves violaciones a los derechos humanos.
- Exhortar a los Estados para que sus elementos o cuerpos de seguridad actúen de acuerdo a protocolos con enfoque de derechos humanos, garantizando que no se haga un uso excesivo de la fuerza y evitar actos de agresión y violación de los derechos de las personas en situación de movilidad humana.

I.2.2. Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos

I.2.2.1. Las autoridades representan a todas las personas: Ombudsperson



La Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) participó en la Mesa de debate denominada "Avances y Retos en la Atención y Protección de los Derechos Humanos a Grupos de Atención Prioritaria" en el marco del LIII Congreso Nacional de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH).

Durante la ponencia presentada en el LIII Congreso Nacional de la FMOPDH a 10 años de la Reforma Constitucional de Derechos Humanos "Retos y Perspectivas desde el sistema no jurisdiccional", la Dra. Ma. de la Luz Domínguez planteo las aportaciones de la reforma en la atención de los grupos de atención prioritaria.

Domínguez Campos explicó que esta reforma mandata al Estado Mexicano a cumplir con las obligaciones de respetar, proteger, promover y garantizar los derechos humanos; asimismo las obligaciones de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a derechos humanos, es decir, que además de cumplir con sus obligaciones debe de investigar con diligencia, sancionar a las autoridades y servidores públicos responsables, y reparar adecuadamente las violaciones de derechos humanos, a través de la restitución, indemnización, satisfacción y garantías de no repetición.

La Presidenta de la CDHEZ señaló que las autoridades deben representar a todas las personas y

en particular poner mayor énfasis para los grupos de atención prioritaria, que son aquellos que enfrentan dificultades para el pleno ejercicio de sus derechos humanos y que constantemente son víctimas de actos de discriminación, exclusión y violencia.

Enfatizó que las aportaciones de los organismos públicos defensores de derechos humanos han sido trascendentes, porque ante la discriminación y exclusión que padecen estos grupos de atención prioritaria, son precisamente las comisiones, nacional y estatales de derechos humanos quienes han dando acompañamiento en sus demandas y reclamos a diversas autoridades ejecutivas, legislativas y judiciales; Realizando pronunciamientos públicos que permita sensibilizar a las autoridades y sociedad sobre la existencia de derechos de estos grupos; así como el emitir Recomendaciones, previa la realización de investigaciones imparciales, diligentes, objetivas y apegadas a la legalidad, para que se restituyan derechos vulnerados, y se ha logrado también que se reconozcan derechos que históricamente se les ha negado.

Subrayó que gracias al trabajo de los organismos públicos de derechos humanos en conjunto con organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales de derechos humanos, se ha logrado que se emita legislación en México, para el reconocimiento de los derechos de diversos grupos que han sido discriminados históricamente como los grupos de LGBT, las mujeres, las y los indígenas, niñas, niños y adolescentes, migrantes, etcétera, y además se ha logrado que se implementen políticas públicas, planes, programas, estrategias, procedimientos y acciones que permita eliminar progresivamente las barreras que impiden la realización de sus derechos y alcancen su inclusión efectiva en la sociedad, lo que se traduce en el pleno goce del ejercicio de sus derechos humanos y libertades fundamentales.

La Ombudsperson en Zacatecas argumentó que actualmente existen muchas áreas de oportunidad o pendientes en la implementación y cumplimiento de la reforma Constitucional de derechos humanos a efecto de que sea vean plasmados los beneficios a toda la población y en particular de los grupos de atención prioritaria, por lo que se requiere implementar la reforma constitucional en las entidades federativas así como en las instancias de gobierno, que son más cercanas a la población.

Recordó, que a pesar de los diversos esfuerzos legislativos han quedado rezagadas y se ha olvidado la implementación efectiva de dicha reforma constitucional en derechos humanos, por lo que dijo que es preciso señalar que a pesar de que las constituciones de los estados se encuentren armonizadas en la materia, no hay mecanismos efectivos para lograr su cumplimiento.

En ese sentido, la Dra. Ma. de la Luz Domínguez propuso que se emitan Nuevas leyes y Reformas legales a distintos ordenamientos jurídicos en los estados, donde se reconozcan derechos como el matrimonio igualitario, el reconocimiento de la identidad de género de la comunidad LGBT o lograr la restitución de derechos de comunidades indígenas, lograr la restitución de derechos de las personas con discapacidad, mujeres, niñas, niños y adolescentes, así como el lograr el goce de derechos de las personas migrantes que transitan por el territorio mexicano.

Además, propuso que se establezcan procesos de planeación democrática, presupuestación y actuación pública con un enfoque basado en los derechos humanos, es decir, que los planes estatales, planes municipales de desarrollo que cuenten con la perspectiva de derechos humanos prevista en esta reforma constitucional de junio del 2011.

En sus propuestas, la titular de la CDHEZ planteó la realización de programas estatales y programas municipales de derechos humanos que establezcan objetivos, estrategias, líneas de acción, indicadores y mecanismos de seguimiento para lograr un auténtico goce y ejercicio de los derechos humanos; Fortalecer el derecho a la igualdad y no discriminación en toda política pública, estrategia, acción, programa o plan que se implemente desde gobierno federal, estatal y municipal; capacitación, formación y profesionalización de las autoridades y servidores públicos en derechos humanos, enfocada de manera directa en la atención de grupos prioritarios.

Así como procesos administrativos y penales de investigación para las y los servidores públicos responsables de violación a derechos humanos que garantice la sanción efectiva y la reparación integral a las víctimas para evitar que queden en la impunidad; promover y difundir el respeto de los derechos humanos en todas las entidades federativas, en todos los municipios del país, en las colonias, barrios y comunidades a través de educación formal y no formal a la sociedad ; y fortalecer las capacidades y los espacios de participación de la sociedad civil organizada.



I.2.2.2. La CDHEZ se une al llamado de la FMOPDH a garantizar el derecho a la salud integral de niñas, niños y adolescentes



La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) se une al exhorto de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH), llama a las autoridades a garantizar el derecho a la salud integral de niñas, niños y adolescentes.

En un comunicado los integrantes de la FMOPDH que representa al sistema no jurisdiccional de protección de derechos humanos en el país, hicieron un llamado a las autoridades federales y locales para emprender una estrategia coordinada que garantice el derecho a la salud, desde el enfoque integral que comprende el bienestar físico, mental y social de niñas, niños y adolescentes.

La Federación explica que durante la pandemia por COVID-19, se ha tenido un mayor impacto en la salud física de las personas adultas y personas mayores, sin embargo, la valoración general de la salud integral de la población no puede dejar de lado a niñas, niños y adolescentes.

En el pronunciamiento de la FMOPDH se expuso que en México hay 38.5 millones de niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años, que representan el 30.8% del total de las personas en el país, representando un tercio de la población, mismo que se encuentra en etapas cruciales de su desarrollo, y ha tenido que enfrentarse a las medidas de confinamiento y cancelación de sus actividades principales, a lo que se suma la preocupación sobre el contagio propio o de algún familiar y las pérdidas fatales.

En ese contexto, añade la afectación a los ingresos familiares que ha generado contextos de precariedad significativa, lo que ha provocado ser una fuente de ansiedad y tristeza que incluso comprometen la alimentación.

Lo anterior guarda una correlación con la reducción en la cantidad y la calidad de las interacciones entre las niñas, niños y adolescentes con sus cuidadores principales, de quienes deberían recibir contención, apoyo y guía para implementar herramientas emocionales, lo que contribuye, a su vez, a generar condiciones adversas para su desarrollo.

Los impactos del COVID 19 en ese grupo etario pueden también valorarse a la luz de otros aspectos relevantes para la salud pública como son el aumento en la tasa de suicidio (37% en la población de 10 a 14 años) y la violencia familiar (24%).

El documento emitido por la FMOPDH detalla que el Consejo Nacional de Población (CONAPO) ha señalado que el confinamiento provocó un aumento del 20% en la falta de anticonceptivos para mujeres adolescentes, lo cual trajo como consecuencia 21 mil 575 embarazos en adolescentes entre el año 2020 y 2021.

Además, en cuanto a la afectación a la salud física de niñas, niños y adolescentes, es obligado hacer mención a la falta de acceso generalizado a medicamentos y servicios oncológicos, mismo que se ha agravado durante y con motivo de la pandemia, lo que incluso compromete la vida de muchos.

Los titulares de los Organismos Defensores de Derechos Humanos señalaron que al hablar de salud es preciso referirse a ésta en su sentido más amplio, es decir, a la salud entendida no sólo desde la ausencia de enfermedades, sino como el estado completo de bienestar físico, mental y social, misma que permite ampliar el espectro de asuntos a atender desde la mirada de la salud pública de manera urgente y también preventiva.

Por lo que las y los Presidentes, Comisionados y Procuradores de Derechos Humanos enfatizaron que la estrategia de las autoridades, debe garantizar la atención de cuatro ejes principales como la Preservación de los servicios de salud que atienden niñas, niños y adolescentes, desde un enfoque integral y de derechos humanos, que garantice la atención médica y medicamentos de calidad respecto de las enfermedades no trasmisibles, tales como cáncer, enfermedades cardiovasculares, diabetes y enfermedades respiratorias crónicas, así como la garantía del esquema básico de vacunación universal.

Además de la atención continua, adecuada y de calidad a otras condiciones de salud, entre ellas, las referentes a la salud reproductiva y salud mental; así como el fortalecimiento en la prevención y atención médica emergente relacionada a COVID-19, reforzando la infraestructura y atención médica en clínicas y hospitales; y la transversalización del interés superior de la niñez y priorización del desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes en las políticas públicas de atención y mitigación del coronavirus SARS-CoV2 (Covid-19).

Finalmente, la FMOPDH señaló que el Estado Mexicano debe cumplir con su obligación de adoptar las medidas necesarias, hasta el máximo de recursos disponibles, para garantizar el derecho a la salud en ese grupo de atención prioritaria en desarrollo.

I.2.2.3. Participa Domínguez Campos en el LIV Congreso Nacional de la FMOPDH



La Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) moderó la Mesa: "Diálogo sobre la Procuración y administración de justicia en articulación con el Sistema No Jurisdiccional de Derechos Humanos", en el marco del LIV Congreso Nacional de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH).

Con la participación de las 33 instituciones que conforman la FMOPDH, reunidos en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) donde tuvo sede del encuentro, se analizaron los retos y desafíos del sistema no jurisdiccional en el país de cara al Siglo XXI.

En su intervención al inicio de la mesa de trabajo que encabezó, la Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos indicó que la transformación de los sistemas, tanto de procuración como de administración de justicia, incluyendo también al penitenciario, ha requerido de grandes esfuerzos, sin embargo, aún se presentan grandes retos.

En ese sentido, la Ombudsperson zacatecana señaló que existen un gran número de quejas presentadas ante los organismos públicos de protección de derechos humanos con relación al derecho de acceso a la justicia, mismo que ha generado una gran cantidad de recomendaciones emitidas por estos organismos, y están dirigidas principalmente a las fiscalías generales y autoridades penitenciarias, y en menor proporción a instancias del Poder Judicial.

Explicó que lamentablemente el sistema penitenciario en el país padece de una profunda crisis en los centros de reinserción social federales y estatales, espacios en los cuales se presentan múltiples violaciones a derechos humanos, aunado a ello, señaló que en el país se cometen diversas vulneración a la dignidad humana, como es la alta incidencia en la tortura, desaparición forzada, desaparición cometida por particulares, violaciones

a los derechos de las víctimas, ya sea de delitos o de violaciones a derechos humanos y de manera transversal, la violación al derecho a las mujeres, a una vida libre de violencia y lamentablemente, agresiones a niñas, niños y adolescentes , así como el creciente desplazamiento forzado interno por razones de inseguridad que se presenta en muchos estados de la República, en muchos municipios del país y que representa múltiples violaciones a derechos y libertades de las personas y familias desplazadas.

La mesa de diálogo estuvo integrada por Armando Hernández, Secretaria Ejecutivo de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia; Alejandro Habib Nicolás, Procurador General de Justicia del Estado de Hidalgo; Ernestina Godoy Ramos, Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México; así como de Julio Ángel Sabines Chesterking, magistrado de la Tercera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Durante el Congreso Nacional, la Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la CDHEZ sostuvo una reunión con El Representante en México de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas en Derechos Humanos (OACNUDH), Guillermo Fernández-Maldonado Castro, quien destacó que actualmente en México hay un enorme desigualdad y violencia, por lo que se requiere convertirla en una oportunidad para revertirla, a partir de un modelo de desarrollo con enfoque de género y derechos humanos.

Así como con el Coordinador Ejecutivo Nacional del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación, Enrique Irazoque Palazuelos; y la Representante y Jefa de la Misión en México de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Dana Graber Ladeck.

Igualmente sostuvo un diálogo con Pedro Américo Furtado de Oliveira, Director de la Oficina de País de la OIT para México y Cuba, y con Giovanni Lepri, Representante en México de ACNUR (Agencia de la ONU para los Refugiados).

Además, sostuvo reuniones con la Senadora Kenia López Rabadán y la Diputada Nelly Minerva Carrasco Godínez, ambas presidentas de las Comisiones Legislativas de Derechos Humanos, respectivamente, así como con el Dr. Ricardo Sepúlveda Íñiguez, experto en derechos humanos.



I.2.3. Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)

I.2.3.1. Se reúne CDHEZ y CNDH con Cónsules y autoridades del SEDIF, INM y SSP para revisar la política y acciones en materia migratoria



- *La Presidenta Honorífica del SEDIF asumió su compromiso en favor de los derechos de las niñas, niños y adolescentes migrantes.*

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se reunieron con autoridades estatales, federales, cónsules, representantes de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), así como de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) con el propósito de abordar la política y prácticas administrativas en materia de migración que se realizan en la entidad, por ser un lugar de tránsito de personas migrantes.

En la reunión celebrada en las instalaciones de la Comisión de Derecho Humanos del Estado de Zacatecas, estuvieron presentes la Señora Sara Hernández de Monreal, Presidenta Honorífica del SEDIF; los Cónsules Héctor Ramiro Sipac Cuin, Benjamín Oswaldo Galán Rodríguez y José Natividad Ortiz Cisnado, de Guatemala, El Salvador y Honduras, respectivamente, radicados en San Luis Potosí; así como el Lic. Jesús Miguel Padrés Durán, Coordinador de la Oficina Foránea en San Luis Potosí de la CNDH; el Ing. Ignacio Fraire Zúñiga, representante del Instituto Nacional del Migrante (INM) en Zacatecas; la Lic. Ana Elisa Ramos Carrillo, Directora General del DIF Estatal; el Mtro. Arturo López Bazán, Secretario de Seguridad Pública de Zacatecas (SSP), Dr. Álvaro García Hernández, titular de la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños, Adolescentes y Familia (PPNNAF).

En el uso de la voz, la Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la CDHEZ indicó que éste

importante encuentro tiene por objeto promover la atención, respeto, garantía, protección y defensa de los derechos humanos de las personas migrantes centroamericanas y de otras nacionalidades que son aseguradas en territorio zacatecano y particularmente de niñas, niños y adolescentes acompañados y no acompañados que se ven inmersos en este proceso de migración y quienes enfrentan el riesgo y la amenaza durante su viaje de ser víctimas de múltiples violaciones a sus derechos humanos y de delitos como son trata de personas.

Durante la reunión la Señora Sara Hernández de Monreal, externó su compromiso de seguir atendiendo a través del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF) a los niños, niñas y adolescentes migrantes que son enviados a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes por parte de autoridades migratorias, y reconoció que son menores en situación de vulnerabilidad. Además, comentó que de manera directa ha atendido a las y los adolescentes asegurados, ya que requieren la atención, para no ser revictimizados después de las causas que enfrentaron en su camino a la entidad, con la esperanza de llegar al país vecino del norte.

La Dra. Ma. de la Luz Domínguez advirtió que todas las autoridades, en el ámbito de su competencia, deben impulsar políticas y prácticas migratorias humanitarias y no criminalizadoras, que reconozcan a los y las migrantes como sujetos plenos de derechos humanos y que se les debe garantizar alojamiento digno, alimentación, agua potable, atención médica, atención consular y el derecho de solicitar asilo y refugio. Destacando la urgente atención que requieren las niñas, niños y adolescentes migrantes.

Sostuvo que, esto será posible a partir del reconocimiento de la migración como un derecho humano y de los migrantes como seres humanos a los que se les debe respetar su dignidad independientemente de su status migratorio irregular o regular.

Por su parte, los Cónsules externaron su preocupación por las múltiples violaciones a derechos humanos que están sufriendo sus connacionales por su paso por México y solicitaron a las autori-



dades del Instituto de Migración en el estado, representado por el Ing. Ignacio Fraire, se garantice el respeto de los derechos humanos de los migrantes que son asegurados en Zacatecas.

Asimismo, pidieron se respete la dignidad de los niños, niñas y adolescentes migrantes acompañados y no acompañados, y se les brinden condiciones adecuadas de una estancia digna y la inmediatez en el plan de protección y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes, bajo el principio del interés superior de la niñez.

Finalmente, las autoridades federales y estatales asumieron el compromiso de trabajar interinstitucionalmente para atender y garantizar los derechos humanos de las personas migrantes.

Cabe resaltar, que en la reunión se contó con la asistencia virtual de Denisse Velázquez Galarza, Coordinadora de Programas de la Organización Internacional para las Migraciones; Brenda Andazola, Asistente de Protección de la Organización Internacional para las Migraciones; Joseph Herreros, representante de la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR); así como Uriel Salas Segovia, Oficial Asistente de Enlace en el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.



I.2.4. Comisiones de Derechos Humanos de otros estados.

I.2.4.1. Llama CDHEZ, CDHJ, CEDHD y la protección de las comunidades indígenas



- *La Ombudsperson zacatenana lamentó los sucesos de violencia en los que niñas, niños, madres y padres de familia vivieron de cerca este fin de semana en Zacatecas.*

Las Comisiones de Derechos Humanos de los Estados de Zacatecas, Jalisco, Nayarit y Durango hacen un llamado enérgico y urgente a las autoridades competentes de seguridad pública federal, estatales y municipales para que de manera inmediata promuevan una coordinación efectiva entre los cuerpos de seguridad de los distintos niveles de gobierno, que permitan reestablecer la paz y seguridad ciudadana de las personas que viven en esa región, bajo el entendimiento de que la protección de la ciudadanía por parte de los agentes del orden debe darse en un marco de respeto de las instituciones, las leyes y los derechos humanos.

La Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) indicó que junto a sus homólogos de Jalisco, Nayarit y Durango condenan los lamentables hechos ocurridos el pasado 22 de septiembre de 2021 en el municipio de Monte Escobedo, Zacatecas, relacionados con la desaparición de seis personas indígenas wixaritari –entre ellas, dos menores de edad– originarias de Santa Catarina Cuexcomatitlán (Tuapurie), municipio de Mezquitic, Jalisco, y de las cuales, desafortunadamente, cuatro han sido localizadas sin vida.

Domínguez Campos explicó que durante el diálogo entre los Ombudsperson estatales señalaron que la desaparición de las seis perso-

nas wixaritari representa un agravio para todo el pueblo wixárika asentado en los estados de Jalisco, Nayarit, Zacatecas y Durango, por lo que las defensorías de los derechos humanos de estas entidades exhortan a las diversas autoridades de procuración y administración de justicia estatales, para que las investigaciones, diligencias y debido proceso se hagan bajo un enfoque diferencial y especializado, con estricto apego a la ley, aplicando los protocolos respectivos.

Detalló que el Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucran derechos de personas, comunidades y pueblos indígenas, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Protocolo de búsqueda de personas desaparecidas y la investigación del delito de desaparición forzada, a efecto de evitar la impunidad, y se sancione en su oportunidad a los responsables de los delitos cometidos.

La Dra. Ma. de la Luz Domínguez, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas; el Dr. Alfonso Hernández Barrón, Presidente de la Comisión Estatal De Derechos Humanos De Jalisco; el Lic. Maximino Muñoz De la Cruz, Presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit y el Dr. Marco Antonio Güereca Díaz, Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango, enfatizaron que las comunidades wixaritari asentadas en los municipios de Mezquitic y Bolaños, Jalisco, al igual que las poblaciones de esa región, como Monte Escobedo y Valparaíso, Zacatecas, se encuentran en una situación de riesgo por la presencia de grupos fuera de la ley, los cuales se han ido incrementando, pese a que en su oportunidad se han realizado diversos pronunciamientos en torno a la falta de seguridad pública en la región y solicitado a los gobiernos federal, estatales y municipales el fortalecimiento de los mecanismos de coordinación entre las instancias de seguridad pública para proteger a quienes habitan y transitan por esos territorios.

Por lo que subrayaron que el derecho humano a la seguridad ciudadana surge de la obligación del Estado de garantizar la seguridad de las personas, en los términos del artículo 3° de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”; del artículo 1° de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre: “Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”; del artículo 7° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Toda persona tiene el derecho a la libertad y a la seguridad personales”; y del artículo 9° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: “Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales”, por lo que debe hacerse efectivo para la población Wixarika y población de estos estados.



I.2.5. Poder Ejecutivo del Federal

I.2.5.1. La CDHEZ impulsa capacitación por parte del Mecanismo para Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la SEGOB



La Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) reunió a las y los periodistas zacatecanos en la" Capacitación para la Protección de Periodistas", impartida por personal del Mecanismo para Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación (SEGOB).

Durante la inauguración de la Capacitación realizada en plataforma virtual, la Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la CDHEZ reconoció la labor de los periodistas que con su labor permiten consolidar una sociedad más informada y más democrática.

En su intervención, el Mtro. Jorge Ruíz Del Ángel del Mecanismo para Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación reconoció la labor de la Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos, quien se ha preocupado por fortalecer a las y los periodistas en el territorio zacatecano, a través de este tipo de capacitaciones.

El Mtro. Jorge Ruíz explicó que este tipo de formaciones tienen la finalidad de que las periodistas y los periodistas conozcan el Mecanismo para Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, así como generar una coordinación para la protección de periodistas y defensores de los derechos humanos.

Durante la capacitación a cargo de personal del Mecanismo para Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación, quien expuso el tema de la autoprotección para periodistas, en donde se les brindó herramientas estar atentos en puntos estratégicos y poder identificar los riesgos a los que los periodistas se enfrentan durante el ejercicio informativo.

I.2.6. Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas

I.2.6.1. Necesario un Plan Estatal de Desarrollo con enfoque de Derechos Humanos: Domínguez Campos



- *Plan Estatal debe garantizar derecho a la paz, seguridad, justicia, salud y educación.*

La Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) presentó su ponencia denominada "La Planeación Democrática del Desarrollo Estatal con Enfoque de Derechos Humanos", durante Foro Temático de Consulta para la Integración del Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027.

Durante su ponencia la Ombudsperson señaló que es fundamental que el Plan Estatal de Desarrollo tenga un enfoque basado en derechos humanos, a efecto de que la planeación impulse el desarrollo integral y sustentable del estado, a través de la regulación y promoción de las actividades económicas, sociales, políticas, culturales, al protección al ambiente y aprovechamiento racional de los recursos naturales, mismas que deben estar orientadas a la promoción y a la protección de los derechos humanos que permita alcanzar el desarrollo económico, social, cultural y político del pueblo de Zacatecas.

Asimismo, dijo es importante que se trabaje en la elaboración del Diagnóstico y Programa Estatal de Derechos Humanos para el periodo 2022-2027, que contenga objetivos, estrategias, líneas de acción, indicadores y mecanismo de seguimiento y evaluación que permita impulsar el respeto, promoción, protección y garantía de los derechos humanos a la paz,



justicia, educación, salud, alimentación, vivienda, trabajo, seguridad social, etc.

Celebró la realización de este Foro Temático de Derechos Humanos, en el que se convoca a la sociedad a participar en el mismo, esperando que sus propuestas sean incorporadas en el Plan Estatal de Desarrollo que guiará las acciones del Gobierno Estatal durante los próximos seis años.

Domínguez Campos, destacó que en Zacatecas se vive al igual que el país, momentos muy difíciles en el ámbito económico, sanitario, social, cultural y de seguridad, siendo una de las principales demandas de la sociedad zacatecana, la exigencia de seguridad, justicia, erradicación de la impunidad, salud, educación, empleo, vivienda, respeto al Estado de Derecho y el cumplimiento irrestricto de los derechos humanos.

Por lo que enfatizó la importancia de que, en el Plan Estatal de Desarrollo, los programas y acciones atiendan rubros como la atención integral a las víctimas del delito, la desaparición de personas, el desplazamiento interno por problemas de inseguridad, la violencia contra las mujeres, la atención a grupos sociales en situación de vulnerabilidad como las niñas, niños y adolescentes, las personas en situación de calle, las personas adultas mayores, las personas con discapacidad, la comunidad LGBT, entre otros. Así como temas como el de la migración y el paso de las personas centroamericanas por la entidad y el acceso al derecho a la salud.

Aseguró que los datos en estas problemáticas, muestran una realidad cruda que se traduce en miles de víctimas de delito que, en muchas ocasiones, posteriormente se convierten en víctimas de violación a los derechos humanos por falta de acceso a la justicia y a la reparación integral, o por la indiferencia e ineficiencia en la esfera gubernamental, así como por el incumplimiento de las obligaciones de las autoridades para desempeñarse con responsabilidad y diligencia, generando como consecuencia una profunda impunidad.

La Dra. Ma. de la Luz Domínguez indicó es urgente que el Estado Mexicano asuma integralmente su responsabilidad de garantizar la seguridad a los zacatecanos y zacatecanas por

conducto de las autoridades de los tres órdenes de gobierno; a través del establecimiento de mecanismos jurídicos, institucionales, administrativos, legislativos y presupuestales necesarios para la debida prevención del delito, la pronta y expedita procuración e impartición de justicia, el eficiente funcionamiento del sistema penitenciario y el acceso de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación integral, mismos que deben tener su base en el Plan Estatal de Desarrollo.

Finalmente mencionó que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ha señalado que un programa orientado por el enfoque basado en los derechos humanos adopta una visión holística del entorno, teniendo en cuenta la familia, la comunidad, la sociedad civil y las autoridades locales y nacionales, ya que tiene presente el marco social, político y legal que determina la relación entre esas instituciones y las exigencias, los deberes y las responsabilidades resultantes. Por lo que un enfoque basado en los derechos humanos suprime los sesgos sectoriales y facilita una respuesta integral a problemas de desarrollo que tienen múltiples dimensiones.

Durante el foro para la Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027 participaron la Secretaria Ejecutiva y Visitadores Generales de la Comisión de Derechos Humanos con ponencias sobre los temas de Grupos en Situación de Vulnerabilidad, Niñez, derechos de las mujeres y perspectiva de Género, así como Migración.

En la inauguración, se contó con la presencia de la Dra. Gabriela Evangelina Pinedo Morales, Secretaria General de Gobierno; el Dr. Raúl Federico García Pérez, Director de la Unidad Académica de Derecho de la Universidad Autónoma de Zacatecas; la Mtra. Ruth Angélica Contreras, Coordinadora Estatal de Planeación del Gobierno de Zacatecas y el Dr. Francisco Murillo Ruiseco, Fiscal General del Estado, quien fungió como moderador del evento.



I.2.6.2. La CDHEZ reconoce a Colectivos de Personas Desaparecidas con el Premio de Derechos Humanos "Tenamaxtle 2021"



- *La CDHEZ entregó Mención Honorífica Post Mortem al C. Óscar Murillo Redin, por su destacado trabajo en favor de la de la salud y el deporte.*
- *La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) otorgó el Premio Estatal de Derechos Humanos "Tenamaxtle 2021" a los Colectivos de Personas Desaparecidas "Zacatecanas y Zacatecanos por la Paz", "Familias Unidas en Búsqueda de una Esperanza", "Amor, Esperanza y Lucha" por la labor que realizan a favor de la promoción, respeto, protección y defensa de los derechos humanos de las personas desaparecidas.*

La Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos, titular del Organismo Defensor de los Derechos Humanos y la Mtra. Gabriela Pinedo Morales, Secretaria General de Gobierno del Estado entregaron el reconocimiento a los Colectivos de Personas Desaparecidas por su destacado trabajo y lucha incansable en la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas, así como su legitima exigencia para localizar con vida a sus seres queridos.

En su intervención, la Dra. Ma. de la Luz Domínguez expuso que en México en los últimos 15 años se ha incrementado exponencialmente la desaparición forzada y la desaparición cometida por particulares, crímenes de lesa humanidad que representan una grave violación de derechos humanos para las víctimas y sus familias.

Indicó que, según la información de la Secretaría de Gobernación, en la actualidad existen 92 mil 884 personas desaparecidas y no localizadas; de las cuales 2 mil 477 personas son de nacionalidad extranjera, lo que representa que miles de

migrantes durante su tránsito por México fueron víctimas de desaparición. Además de que se han localizado 2 mil fosas clandestinas en el país, como 3 mil 025 cadáveres, de los cuales el 61 por ciento aún no son identificados.

Domínguez Campos señaló que Zacatecas no escapa a esta crisis de desaparición de personas, ya que existen más de 2 mil 313 personas desaparecidas de las cuales aún no han sido localizadas 1 mil 392; y se han localizado más de 337 fosas clandestinas del 2015 al 2021, en las cuales se han encontrado miles de cuerpos de los cuales, muchos aún no están identificados, lo que impide que sus familias accedan a la justicia, a la verdad y a la reparación integral.

La Ombudsperson dijo que esta cruda realidad ha generado miles de víctimas a quienes se les ha vulnerado el derecho a la libertad y seguridad personal, el derecho a integridad personal y la vida, el derecho a la personalidad jurídica y a la identidad y el derecho de acceso a la justicia, por ello la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, ha asumido el compromiso de dar acompañamiento permanente a los familiares de personas desaparecidas, y de respaldarlos en su incansable lucha y exigencia legítima por localizar con vida a sus seres queridos.

Añadió que a pesar de ello, el Estado Mexicano no ha brindado las garantías para prevenir, investigar, sancionar y erradicar el fenómeno de la desaparición de personas, tampoco ha cumplido con su obligación en materia de reparación integral a las víctimas, por lo que se han tenido que organizar en "Colectivos de Personas Desaparecidas" para compartir su dolor y para exigir a las autoridades de seguridad pública, procuración de justicia, servicios forenses, búsqueda de personas y atención a víctimas el cumplimento de su deber de prevenir este delito, localizar con vida a sus familiares, investigar con diligencia y esclarecer los hechos, identificar y sancionar a los responsables, así como la identificación de cuerpos y restos humanos localizados en fosas clandestinas, todo ello para erradicar la impunidad.

La titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, afirmó que el Organismo que encabeza, reconoce su esfuerzo, labor y lucha incansable en pro de la localización con vida de sus seres queridos, realizando acciones como búsquedas en campo en diversos municipios, en Centros Penitenciarios, en Servicios Médicos Forenses, en Centros de Salud y Centros de Salud Mental, asimismo han realizado marchas y caravanas con otros colectivos, en los estados de Tamaulipas, Jalisco, Veracruz, Guerrero, Baja California, Nuevo León y Guanajuato.

Por su parte la Secretaria General de Gobierno, la Mtra. Gabriela Evangelina Pinedo Morales, destacó la labor de la Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos en el acompañamiento que realiza a los Colectivos de Personas Desaparecidas, así como la labor que realizan los Colectivos por encontrar a sus seres queridos, recordando sus nombres para que no sean olvidados, y para que al Estado no se le olvide que tiene esa deuda pendiente.

Pinedo Morales indicó que más allá de un evento de festejo, es un evento doloroso que recuerda las más grandes deudas que tiene el Estado Mexicano y el Estado Zacatecano no es la excepción, porque es una enorme deuda con nuestras desaparecidas y con nuestros desaparecidos, que no solo son cifras vacías en un listado.

La Secretaria General de Gobierno, reconoció que el Estado tiene una gran deuda con los familiares de las personas desaparecidas, y que

continuaran trabajando para que las condiciones se puedan dar y tengan la atención que merecen para la búsqueda efectiva, con resultados de sus desaparecidas y desaparecidos, y por supuesto, para la reparación del daño.

Durante la Ceremonia de Premiación, se entregó la Mención Honorífica Post Mortem al C. Óscar Murillo Redin, por su destacado trabajo en favor de la dignidad humana a través de sus acciones en favor de la salud y el deporte, al haberse dedicado a la fisioterapia por más de 26 años, durante los cuales ayudó a cientos de zacatecanos y zacatecanas que por padecer alguna lesión o afectación física tuvieron que buscar ayuda y encontraron en la rehabilitación, fortalecimiento físico y terapia brindada.

Cabe destacar que Oscar Murillo Redin fue un impulsor del deporte en barrios y colonias, apoyando a jóvenes que padecían algún tipo de adicción y que logró incorpóralos a la disciplina deportiva del futbol, acción que permitió no solo rescatar a estos jóvenes sino trasmitirle el amor al deporte y a un estilo de vida alejado de las adicciones.



I.2.6.3. La CDHEZ y la Defensoría Pública signan Convenio de Colaboración



La Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) y el Lic. José Pablo Mercado Solís, Director General de Defensoría Pública firmaron convenio de colaboración para la protección, defensa, observancia, promoción y difusión de los derechos humanos de las y los zacatecanos.

En su intervención, la Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos enfatizó que ante los momentos de violencia y criminalidad que se vive en país y en la entidad, es importante fortalecer instituciones como la Defensoría Pública, la cual, junto a las instituciones de procuración y administración de justicia, así como del sistema penitenciario forman el sistema de justicia penal en estado, cuyos servidores públicos están obligados a garantizar del derecho de acceso a la justicia.
Domínguez Campos señaló que al igual que la institución que en cabeza, son las defensoras y los defensores públicos quienes velan por la protección, defensa, respeto y garantía de los derechos humanos de las y los zacatecanos durante procesos judiciales.

La Dra. Ma. de la Luz Domínguez advirtió que la Defensoría Pública tiene un papel relevante en el sistema de justicia penal, y que no puede ser relegado como lo había estado en temas administrativos, sino que tenía que dársele su papel jurídico, técnico y social que representa, y por ello se transformó como un organismo público descentralizado, por lo que recordó que en su momento, le correspondió elaborar el proyecto de Ley del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Zacatecas, con la finalidad de que esta institución obtuviera el reco-

nocimiento jurídico, legal y social que le corresponde.

La Ombudsperson indicó la Comisión de Derechos Humanos, a través de este convenio, les brindará acompañamiento para su fortalecimiento en el ámbito de su competencia, con conferencias, talleres y capacitaciones en materia de Derechos Humanos, Debido Proceso y el Derecho de Defensa Técnica Adecuada.

Llamó a los defensoras y defensores públicos a realizar su labor con profesionalismo, debida diligencia y respeto a los derechos humanos, y con ello evitar el abandono de sus representados en materia civil, familiar, mercantil, laboral y administrativa, ya que dependen de aquellos para que se les garantice su derecho de acceso a la justicia, además en muchas ocasiones los justiciables son personas de escasos recursos económicos y en situación de vulnerabilidad.

En su intervención, el Lic. José Pablo Mercado Solís, Director General de Defensoría Pública agradeció a la Dra. Ma. de la Luz Domínguez por su disponibilidad y voluntad institucional, para que dentro de sus actividades y el plan de acción de la Comisión de Derechos Humanos se realice la capacitación del cuerpo de asesores que conforman la Defensoría Pública de la Entidad.

.



I.2.6.4. Llama Ombudsperson a darle valor a la opinión de niñas, niños y adolescentes



La Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) participó en el 1er. Foro Sobre la Prevención del Abuso Sexual Infantil, convocado por el Sistema Estatal DIF, en donde manifestó la importancia de considerar a las niñas, niños y adolescentes como sujetos plenos de derechos, y con ello darle valor a sus opiniones y sentimientos.

La Presidenta de la CDHEZ destacó que es relevante cambiar la visión que como adultos se tiene de los infantes, en donde se considera a las niñas, niños y adolescentes como sujetos de protección y asistencialismo social, sin embargo, éstos deben ser considerados como sujetos plenos de derechos y de dignidad humana.

Domínguez Campos señaló que cuando se comete el abuso sexual en niñas, niños y adolescentes, ellos tienen una desventaja al estar en una situación de vulnerabilidad, y no estar en condiciones de igualdad con las personas adultas, por ello al denunciar una agresión sexual, se encuentran como primer obstáculo la ausencia de credibilidad en sus palabras.

Reiteró que cuando alguien le hace a una niña, niño o adolescente una mirada lasciva, un tocamiento, escuchó o le dijeron algo con un sentido o connotación sexual, los adultos

debemos estar alerta, porque eso refiere que este tipo de conductas puede ir avanzando y puede llegar hasta un abuso sexual.

Refirió que se considera abuso sexual infantil o pederastia a toda conducta en la que un menor es utilizado como objeto sexual por parte de otra persona con la que mantiene una relación de desigualdad, ya sea en cuanto a la edad, la madurez o el poder. Se trata de un problema universal que está presente en la actualidad, el cual debe ser erradicado porque al presentarse se vulneran en perjuicio de niñas, niños y adolescentes derechos a la integridad personal, libre desarrollo de la personalidad, protección de la dignidad, a no ser objeto de ningún tipo de violencia, protección contra el abuso sexual, entre otros.

La Ombudpersona indicó que como padres de familia se tiene la obligación de creerles a sus hijas e hijos ante la denuncia de algún tocamiento, insinuación o acoso sexual en su contra, ya sea por parte de un familiar, un conocido o cualquier otra persona, y después investigar, porque al minimizar estos comentarios se les deja en la indefensión y vulnerabilidad para ser víctimas de este delito.

Domínguez Campos afirmó que el sistema educativo y las las áreas de desarrollo social pueden cumplir un rol fundamental en la detección temprana y la prevención, asimismo, el sistema de salud es estratégico en la asistencia ante daños a la integridad física, a la salud psíquica, sexual y reproductiva, así como en la prevención y seguimiento de los casos.

Finalmente, expuso los tipos de abuso sexual, las modalidades de comisión de este delito, la importancia de la labor del sistema de procuración y administración de justicia para investigar este tipo de delitos, identificar a los responsables y sancionarlos conforme a la ley y con ello evitar la impunidad.

Cabe destacar que durante el evento de inauguración estuvieron presentes la Mtra. Fátima Xóchitl Encina Arroyo, Fiscal Especializada de Atención a Delitos contra las Mujeres por razones de Género, la Lic. Lorena Lamas Arroyo, Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA); la Mtra. María de Jesús Solís Gamboa, Presidenta Honorífica del DIF Municipal de Guadalupe; el Dr. Uswaldo Pinedo Barrios, Secretario de Salud de Zacatecas, así como el Dr. Álvaro García Hernández, Procurador de Protección a Niñas, Niños, Adolescentes y Familia del Sistema Estatal DIF.



I.2.6.5. Lamentable que en pleno siglo XXI continúe la discriminación a las mujeres: Ombudsperson



La Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) participó en el Foro: Por los Derechos Humanos de las Mujeres con la ponencia denominada "Derechos Humanos de las Mujeres", en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Durante su ponencia, la Presidenta de la CDHEZ enfatizó que las niñas y mujeres al igual que los hombres deben de gozar de todos los derechos sin ningún tipo de discriminación social, económica, política, ideológica o cultura y además, vivir libres de toda forma de violencia.

Indicó que lamentablemente en este siglo XXI aún se ve mucha discriminación contra las mujeres, así como diversas formas de violencia como lo es la psicológica, física, patrimonial, económica, sexual, política y cualquier otra que atenta contra la dignidad, integridad y liberad de las mujeres y niñas.

Domínguez Campos aseveró que el Secretario General de la ONU ha sido enfático al considerar la violencia contra las mujeres como una pandemia mundial, lo que representa un agravio moral para todas ellas, un motivo de vergüenza para todas nuestras sociedades y un obstáculo importante para el desarrollo inclusivo, equitativo y sostenible.

Acentuó que no puede hablarse que en un Estado hay democracia, o que hay desarrollo, si la mitad de la población que son las mujeres, se ven afectadas en todos los sentidos y siempre son menoscabadas en comparación con los derechos de los hombres, cuando estos deben de ser ejercidos en igualdad de condiciones.

Indicó que ante estas circunstancias que se viven en México y el estado, es necesario que se investigue la discriminación a la luz de la perspectiva de género, y con ello se elimine la asignación de roles y los estereotipos de género y se fortalezcan los marcos normativos que, precisamente, promueven la igualdad y la no discriminación.

Domínguez Campos dio a conocer durante su ponencia las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el que se estima que, de enero a noviembre 2021, más de 98,264 víctimas fueron mujeres, de las cuales 57.62% (57,194) fueron lesiones dolosas, 16.21% (16,091) fueron lesiones culposas, 0.93% (887) feminicidios, 2.56% (2,540) homicidios dolosos, 2.99% (2,967) homicidios culposos. 233,987 delitos contra la familia; además de más de 264,80 mil llamadas por violencia contra las mujeres.

Por lo anterior, expuso que es necesario que las autoridades en el ámbito de su competencia, fortalezcan los planes, programas y acciones en materia de prevención, investigación, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.



I.2.7. Poder Legislativo del Estado de Zacatecas

I.2.7.1. La Ombudsperson se reúne con las y los diputados para el análisis del presupuesto 2022 de la CDHEZ



La Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) se reunió con las Señoras y Señores Diputados de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la LXIV Legislatura del Estado, para revisar el Presupuesto de Egresos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas para el ejercicio fiscal 2022.

Domínguez Campos expuso la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, presentó a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas, su propuesta de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 2022, por un importe de $47,398,225.00 (Cuarenta y siete millones trescientos noventa y ocho mil ochocientos doscientos veinticinco pesos 00/100 M.N.), sin embargo, dicha Secretaría integró una propuesta por el orden de $32,248,831.00 (Treinta y dos millones doscientos cuarenta y ocho mil ochocientos treinta y un pesos 00/100 M.N.), asignación que representa una disminución del 23.75% en relación al presupuesto asignado en el año 2021, cuya cifra fue de $42,297,112 (Cuarenta y dos millones doscientos noventa y siete mil ciento doce pesos 00/100 M.N.); por consiguiente se puede apreciar que es una cantidad similar a la asignada en el Presupuesto de Egresos del Estado de Zacatecas del año 2016 ($32,227,679) e insuficiente para cumplir con las atribuciones en materia de protección y defensa, promoción y difusión, observancia, estudio, investigación y divulgación de los derechos humanos, así como el impulso del desarrollo institucional.

Por lo anterior, la titular del Organismo Defensor de los Derechos Humanos solicitó a las y los legisladores los recursos necesarios para cumplir con sus atribuciones legales y función social en materia de protección y defensa, promoción y difusión, observancia, estudio, investigación y divulgación de los derechos humanos, así como el impulso del desarrollo institucional.

Asimismo refirió la importancia de contar con los recursos necesarios para atender a los grupos en situación de vulnerabilidad como son las personas con discapacidad, niñas, niños y adolescentes, integrantes de la comunidad LGBTTTIQ+, personas adultas mayores, personas privadas de la libertad, migrantes, indígenas, persona en situación de calle y mujeres, así como a toda la población en general.

En la reunión estuvieron presentes, la Diputada Roxana Muñoz, Presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, y las y los demás integrantes Priscila Benítez, Fernanda Miranda, Ana Luisa Del Muro, José Guadalupe Correa y Gerardo Pinedo, así como los y las diputadas Susana Barragán, Gabriela Basurto, Karla Valdez, María del Mar Ávila, Analí Infante, Víctor Humberto de la Torre, Jehú Salas, Sergio Ortega y David González.



I.2.7.2. La Dra. Ma. de la Luz Domínguez asiste a la instalación de la Comisión legislativa de Derechos Humanos



La Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) asistió a la instalación de la Comisión Legislativa de Derechos Humanos de la LXIV Legislatura del Estado de Zacatecas.

En su intervención, Domínguez Campos, Presidenta de la CDHEZ explicó la importancia que tienen el respaldo del Poder Legislativo para la institución que encabeza, ya que en el momento en el que se emiten recomendaciones y estas no son aceptadas por las autoridades estatales o municipales, las diputadas y los diputados son los encargados de llamar a dichos funcionarios para analizar el motivo de su rechazo, y en su caso, sean aceptadas. Entonces, afirmo, el papel de la Legislatura del Estado es fundamental para la vigencia plena de los derechos humanos.

Indicó que con la recomendación que emite la CDHEZ, se buscan medidas institucionales, administrativas, legislativas para que se logre la reparación del daño a la víctima de violación de derechos humanos, en su caso, la indemnización, rehabilitación, garantías de satisfacción y garantías de no repetición.

Domínguez Campos destacó que en la actualidad existen múltiples vulneraciones a los derechos humanos de mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, integrantes de la comunidad LGBTTTIQ+ personas adultas mayores, migrantes, indígenas, personas en situación de calle, entre otras, por lo que requieren acciones institucionales y modificaciones legislativas para lograr el protección, respeto y garantía de sus derechos y libertades fundamentales.

Afirmó la urgencia de atender la problemática de desaparición de personas e impulsar una estrategia y programa de atención a víctimas del delito y víctimas de desplazamiento forzado interno por razones de inseguridad.

Finalmente, exhortó a las y los legisladores a llevar a cabo la armonización del Marco Jurídico Estatal con los Instrumentos de Derechos Humanos suscritos por el Estado Mexicano, a efecto de fortalecer la protección, promoción, respeto y garantía de los derechos humanos de las zacatecanas, zacatecanos y personas que transitan temporalmente por el estado.

En el acto estuvieron presentes la Diputada Georgia Fernanda Miranda Herrera, Presidenta de la Comisión Legislativa de Derechos Humanos, así como las Diputadas y Diputados integrantes Priscila Benítez Sánchez, Karla Dejanira Espinoza, Susana Andrea Barragán Espinosa, Zulema Yunuen Santacruz Márquez, José Juan Estrada Hernández y Xerardo Muñoz Ramírez.





I.2.7.3. Propone Ombudsperson legislar en favor de los Grupos en Situación de Vulnerabilidad



La Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) asistió a la instalación de la Comisión Legislativa de Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad de la LXIV Legislatura del Estado de Zacatecas.

En el uso de la voz, la Ombudsperson explicó que para la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas es importante que la Legislatura del Estado modifique el marco jurídico para fortalecer las capacidades de los grupos en situación de vulnerabilidad, mismos que se encuentran en ese contexto por condiciones sociales, económicas, culturales, políticas, además porque en muchas ocasiones, las políticas públicas que se han impulsado por el Estado Mexicano no han sido suficientes para generar las capacidades necesarias de este grupo poblacional.

Domínguez Campos aseveró que las personas que integran este grupo poblacional son las personas con discapacidad, mujeres, niñas, niños y adolescentes, integrantes de la comunidad LGBTTTIQ+, personas adultas mayores, personas privadas de la libertad, migrantes, indígenas, persona en situación de calle, quienes requieren del apoyo gubernamental.

La titular de la CDHEZ señaló que, es de particular importancia que se legisle en beneficio de la comunidad indígena que vive de manera temporal en Zacatecas y que trabaja en tareas agrícolas, comerciales, de prestación de servicios, entre otras.

Destacó que las poblaciones indígenas que vienen a laborar a Fresnillo, Villa de Cos, Pánuco, Enrique Estrada Ojocaliente, Loreto y en las regiones donde hay trabajo agrícola, requieren de la protección de sus derechos, por ello propuso a esta comisión legislativa que visualice la posibilidad de que se pudiera emitir una ley en materia de derechos indígenas para la atención de este grupo poblacional.

La Presidenta de la CDHEZ señaló la importancia de legislar en materia de accesibilidad para las personas con discapacidad, y refirió la importancia de apoyar a los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en las casas institucionalizadas, así como a las personas en situación de calle, las cuales a raíz de la pandemia, se han incrementado de manera sustancial y las podemos ver en los semáforos, en las calles, afuera de las tiendas de conveniencia pidiendo una moneda, por lo que consideró fundamental fortalecer el marco jurídico estatal para ayudar y fortalecer a estos grupos de personas.

Asimismo, la Ombdusperson afirmó que, otro grupo en situación de vulnerabilidad, sin lugar a dudas es la comunidad LGBTTTIQ+, el cual ha sido históricamente discriminada por su preferencia sexual, por lo que se espera que esta legislatura, sí le reconozca derechos que se les ha negado, como es el matrimonio igualitario y particularmente el derecho a la identidad. Además, dijo, que las mujeres no deben ser olvidades porque son un grupo en situación de vulnerabilidad por las condiciones socio históricas, económicas, culturales, que han padecido.

También, Ma. de la Luz Domínguez Campos, afirmó que, desde la Comisión de Derechos Humanos se solicita el fortalecimiento de la legislación estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la discriminación en todos estos grupos, porque dijo, que lamentablemente se ven afectados en distintos ámbitos de su vida.



I.2.7.4. Solicita Ombudsperson revisar el marco jurídico para reconocer a NNA como sujetos plenos de derechos



La Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) asistió a la instalación de la Comisión Legislativa de la Niñez, la Juventud y la Familia de la LXIV Legislatura del Estado de Zacatecas, en donde solicitó a sus integrantes que se revise el marco jurídico estatal para que en todas estas leyes se reconozca a niñas, niños y adolescentes como sujetos plenos de derechos y no como objeto de protección.

La Presidenta de la CDHEZ indicó que para la institución que representa es fundamental el trabajo que realiza Comisión Legislativa de Niñez, Juventud y Familia, porque esta habrá de dictaminar aquellas iniciativas de ley y reformas que impacten directamente en la protección, defensa, promoción y garantía de los derechos humanos de niñas, niños, adolescentes, y sobre todo, porque ante la problemática que vivimos en la actualidad en muchas materias, es fundamental fortalecer ese marco jurídico que garantice el pleno ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

La Defensora de los Derechos Humanos en Zacatecas destacó que el primer aspecto fundamental que solicita desde la Comisión de Derechos Humanos del Estado, es que se haga una revisión integral al marco jurídico estatal para que en todas estas leyes se reconozca a niñas, niños y adolescentes como sujetos plenos de derechos y no como objeto de protección.

Añadió que lamentablemente, anterior a la vigencia de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, siempre se consideró en la legislación a las niñas, niños y adolescentes como objetos de protección, como objetos de asistencia social, sin embargo, después de esa reforma y de la reforma al artículo cuarto constitucional, se establecen como sujetos plenos de derechos, por ello es



necesaria una armonización en nuestra constitución y leyes local.

Además, asevero que es fundamental que se tome en cuenta las ideas, opiniones y sentimientos de niñas, niños y adolescentes, porque las decisiones de las personas adultas impactan directamente a los menores, por lo que deben fortalecerse las normas en materia de derecho a la libre expresión, derecho a la información, participación, asociación y reunión de niñas, niños y adolescentes.

Asimismo, señalo la urgencia por fortalecer el marco jurídico estatal en materia de prevención de violencia en general, violencia sexual, violencia escolar, acoso escolar contra de niñas, niños y adolescentes.

Igualmente se deben fortalecer las normas que garanticen los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en casas institucionalizadas, así como la prevención de embarazo en adolescentes.

Por otra parte, aseveró la importancia de fortalecer los derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes.

Indicó que la Comisión de Derechos Humanos, se pone a disposición de esta Comisión legislativa a través de su Visitaduría de Niñas, Niños y Adolescentes, como una institución aliada, pendiente para coadyuvar en esos procesos de reforma legislativa y sobre todo con el ánimo de que todos juntos trabajemos, tanto desde el Poder Legislativo, Comisión de Derechos Humanos, DIF Estatal y Gobierno del Estado para lograr la protección, promoción, defensa, protección y garantía de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes.

I.2.7.5. Domínguez Campos invita a las y los legisladores a hacer frente común por los Migrantes



La Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) asistió a la instalación de la Comisión Legislativa de Atención a Migrantes de la LXIV Legislatura del Estado de Zacatecas, donde invitó a las diputadas y a los diputados a hacer un frente común en favor de los derechos de todas las y los migrantes, sobre todo porque nuestro estado tiene una tradición migratoria histórica hacia Estados Unidos de Norteamérica.

La Ombudsperson refirió que en la actualidad, México es un país de origen, destino, tránsito y retorno de migrantes, particularmente se ha intensificado el tránsito de personas migrantes cuyo destino son el vecino país de Norteamérica, destacando en cantidad, las personas de Guatemala, El Salvador y Honduras, también se les han sumado en gran medida, personas en movilidad provenientes de Haití, Ecuador y Cuba, además se ha detectado personas que ejercen la migración transoceánica, llegando a pasar por nuestro estado, personas provenientes de Turquía, Sri Lanka, India, Kenia, entre otros países, por lo tanto consideró que la migración debe ser considerado como un derecho humano y no como una conducta ilegal o delictiva.

La Presidenta de la CDHEZ indicó que uno de los grandes retos para los gobiernos estatal y municipales es garantizar los derechos de las migrantes y los migrantes que transitan temporalmente por la entidad zacatecana, porque este no es solo un tema del gobierno federal, por lo que no se puede abstraer y dejarse de lado, por ello invito a las legisladoras y legisladores a hacer un frente común para garantizar en el ámbito de la competencia, de cada instancia, que se cumpla con los derechos de los migrantes y las migrantes que transitan temporalmente por territorio zacatecano.

Exhortó a la Comisión Legislativa de Atención a Migrantes a actualizar el marco jurídico estatal para impulsar a favor de los zacatecanos y zacatecanas que emigran al exterior, políticas públicas, así como mecanismos eficientes que permitan que programas, servicios y acciones de las instituciones gubernamentales estatales puedan ser accesibles.

Durante la instalación se contó con la presencia del Diputado José Juan Estrada Hernández, Presidente de la Comisión de Atención a Migrantes, así como la Diputada María del Mar Ávila Ibargüengoytia, el Diputado Sergio Ortega Rodríguez, el Diputado José David González Hernández, así como la Señora Sara Hernández de Monreal, Presidenta Honorifica del SEDIF, el Ing. Ignacio Frayre Zúñiga, Titular de la Representación del Instituto Nacional de Migración en Zacatecas y la Hnna. Irene Jiménez, encargada de la Casa del Migrante.





I.2.7.6. Participación Ciudadana fundamental para la construcción de una sociedad democrática: Ombudsperson



La Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) asistió a la instalación de la Comisión Legislativa de Parlamento Abierto de la LXIV Legislatura del Estado de Zacatecas.

En el uso de la voz, la Ombudsperson señaló que la participación ciudadana es un elemento fundamental para la construcción de una sociedad democrática, en la que se participe activamente, no solamente en el momento de ejercer el voto, sino para realizar iniciativas y reformas legales, así como también en la construcción de políticas públicas, por lo que dijo que se requiere de instrumentos legislativos que mandate esa participación ciudadana.

Finalmente, dijo que la Comisión de Derechos Humanos del Estado que preside, es una institución aliada para fortalecer éste derecho y otros derechos fundamentales como la transparencia, el acceso a la información pública, el derecho a la rendición de cuentas ante la sociedad y otros más, que permitan realmente la construcción de un Estado constitucional del derecho, en donde las garantías, los derechos y, por supuesto, la dignidad humana estén por encima de cualquier interés político, económico o de cualquier tipo.

Durante la instalación, fue encabezada por el Diputado Enrique Laviada Cirerol, Presidente de la Comisión Legislativa de Parlamento Abierto, así como de sus integrantes, las Diputadas Giorgia Fernanda Miranda Herrera, Roxana del Refugio Muñoz, Gabriela Monserrat Basurto Ávila, Zulema Yunuen Santacruz Márquez, así como integrantes de la Sociedad Civil Organizada.

I.2.8. Organismos Autónomos

I.2.8.1. La CDHEZ llama a las autoridades a implementar acciones en favor de las mujeres



La Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) hizo un llamado a las autoridades de los tres órdenes de gobierno, a implementar estrategias y acciones efectivas que trasciendan del discurso y eviten que más mujeres, niñas y adolescentes sean víctimas de violencia física, psicológica, sexual, patrimonial, económica o política que dañan su dignidad, integridad y libertad.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la CDHEZ se unió a las actividades para contribuir a fomentar la conciencia pública para eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres, con la presentación del cambio de logotipo en el que se incorpora una figura femenina, como elemento indispensable para visibilizar a las mujeres, promover sus derechos, prevenir violaciones a los mismos y contribuir a lograr la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres.

La Dra. Ma. de la Luz Domínguez, Presidenta de la CDHEZ señaló que cada día millones de mujeres son violentadas y asesinadas, y lamentablemente México se encuentra entre los 20 peores países con esta problemática, que junto con Centro América se considera la región más violenta para las mujeres fuera de una zona de guerra.

La Ombudsperson señaló que, en Zacatecas la Comisión de Derechos Humanos en esta materia, se brinda acompañamiento jurídico y psicológico, asesoría y atención a las mujeres víctimas de violencia promoviendo, protegien-

do y defendiendo sus derechos, por lo tanto, se creó la Visitaduría de atención de mujeres la cual ha trabajado de manera intensa conjuntamente con las demás áreas de este Organismo.

Domínguez Campos, advirtió en es te sentido es importante señalar que se han emitido Recomendaciones por haberse acreditado violaciones al Derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia, en relación con el derecho a la integridad personal y sexual, al Derecho de acceso a la justicia, al Derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, en relación con el derecho de niñas, niños y adolescentes a que se proteja su integridad personal y sexual, al Derecho a la salud, relacionado con el disfrute del más alto nivel posible de salud de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, al Derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia, específicamente a no ser víctima de violencia obstétrica, en relación con los derechos sexuales y reproductivos.

Además, como parte de la observancia a este sector, se ha realizado un monitoreo en el Hospital de la Mujer y Hospital de Fresnillo sobre la atención a mujeres embarazadas; se han revisado las carpetas de investigación sobre casos de violencia contra las mujeres en los 18 distritos judiciales; se colaboró con SEPAVIF en la elaboración del Protocolo de Actuación en casos de Violencia Obstétrica; se han revisado las casas y refugios que atienden mujeres víctimas de violencia; y se ha acompañado a la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) en la elaboración del Protocolo para atender, prevenir y sancionar el hostigamiento y el acoso sexual al interior de la Máxima Casa de Estudios.

Junto con estas acciones, la Dra. Ma. de la Luz Domínguez dio a conocer acciones para contribuir al fortalecimiento institucional con la develación de la placa de la Sala de Consejo "Hermanas Mirabal", en homenaje a mujeres activistas y defensoras de derechos que fueron cruelmente asesinadas y en virtud a tal hecho la Asamblea General de las Naciones Unidas determinó el 25 de noviembre de 2021 como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Además, en dicha sala se develaron las fotografías de las y los presidentes que contribuyeron en las acciones para la creación y consolidación de la Comisión.

Finalmente, como parte del fortalecimiento institucional, la titular del Organismo Defensor de los Derechos Humanos presentó Revista Zacatecana de Derechos Humanos en el cual se escriben artículos especializados en derechos humanos y de artículos sobre las principales recomendaciones emitidas por este organismo; la aplicación digital de la CDHEZ que próximamente estará disponible para los teléfonos inteligentes, así como la nueva página web de la CDHEZ, así como el nuevo canal de Podcast donde podrán disfrutar de cuentos y programas de radio para que las niñas y niños conozcan sobre sus derechos.

Cabe destacar que en el evento se contó con la presencia de la Mtra. María del Rosario Arellano Valadez, Lic. Félix Vázquez Acuña, Lic. José Manuel Félix Chacón, consejeros de la CDHEZ; así como del Dr. Jaime Cervantes Durán, quien fue el primer Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, así como el Dr. Enrique Argüelles Robles, quien formó parte del primer consejo consultivo del organismo protector de los derechos humanos.

Asimismo, asistieron las ex consejeras y ex consejeros de este organismo público que han sido parte del andamiaje institucional como la Mtra. Rosario Carlos Rueda, Dra. María Teresa Villegas Santillán, Lic. Isabel González, Pbro. Juan Diego Chávez García y el Lic. Luis Guillermo Flores Sánchez.

I.2.8.2. CDHEZ Rinde homenaje a Tenamaxtle



En la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), se develaron murales en honor a Tenamaxtle, del artista plástico Pablo Chávez, como parte de la promoción y difusión del derecho de acceso a la cultura, así como del reconocimiento a artistas plásticos zacatecanos.

Para asegurar el disfrute de la cultura y de sus componentes en condiciones de igualdad, dignidad y no discriminación, la Dra. Ma. de la Luz Domínguez impulsó la creación de obras pictóricas, alusivas a Tenamaxtle, quien es considerado el precursor de los derechos humanos en América Latina, mismos que fueron denominados “El Despertar Caxcán” y “El Legado”.

El artista zacatecano Pablo Chávez, detalló que el mural denominado “El Despertar Caxcán”, es representado entre figuras geométricas de llamativos colores, que describe el inicio de la lucha de la tribu Caxcana contra los españoles durante la conquista, bajo líneas en figuras transparentes, en las que se observa a Tenamaxtle como líder de esta tribu, y quien manifiesta su inconformidad por la violación de los derechos humanos de su gente.

En esta obra “El Despertar Caxcán”, también se transmite el reclamo hacia los invasores, porque siendo indígenas libres y habiendo recibido a los españoles de forma pacífica, como respuesta “los naturales” fueron sometidos y vejados de forma contraria a la justicia natural.

Asimismo, se muestra la valentía para defender a sus mujeres, hijos y sus propias vidas, esto representado por una mujer indígena que prefiere, con su hijo, lanzarse al vacío, desde el cerro del Mixton, antes de ser apresada por los españoles para ser tratada de forma inhumana. Además, en la parte superior central del mural

se observa el nuevo logotipo de la Comisión de Derechos Humanos, como órgano defensor de los derechos de las y los zacatecanos, en el que se incorpora una figura femenina.

El mural denominado "El Legado", que se encuentra al interior de la biblioteca de la CDHEZ, se observa como figura central a Tenamaxtle con los brazos extendidos, protegiendo los derechos humanos de todas las personas representadas con una niña, una mujer, un campesino, un minero, un policía, un obrero, así como un integrante de una familia. Expresando que todas y todos los niños, niñas, adolescentes, mujeres y hombres gozan de los mismos derechos fundamentales.

Mientras que en la parte baja del mural se ven unas manos entrelazadas, que representan la labor y el trabajo de las personas que laboran en este Organismo Defensor de los Derechos Humanos.

Actualmente, al ser considerado Tenamaxtle un símbolo de resistencia y el antecesor de los defensores de los derechos humanos, en el mural "El Legado" se plasma del lado izquierdo el mapa de México con un triángulo que indica el lugar del nacimiento de Tenamaxtle, y a su derecha se encuentra el nuevo logotipo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas.

José Pablo Chávez Román, nació en la ciudad de Guadalupe Zacatecas un 28 de octubre de 1955, quien inició sus estudios como pintor al Oleó en Ciudad Juárez, Chihuahua en 1978, teniendo como Maestros a Juan Navarro y Víctor Tagle.

Desde 1980 hasta a la fecha, ha realizado una serie de exposiciones, estatales, naciones e internacionales, tanto de manera individual y otras tantas colectivas.

Chávez Román fue reconocido por el descubrimiento de Fósiles de Mamut en el Municipio de Guadalupe, Zacatecas, además de haber obtenido diversos galardones a nivel nacional e internacional, por su contribución a la difusión de la Cultura Mexicana.



I.2.9. Ayuntamientos de Zacatecas

I.2.9.1. La Presidenta de la CDHEZ asiste a la celebración de Matrimonios Colectivos en la Capital de Zacatecas.



La Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) estuvo presente en la celebración de los Matrimonios Colectivos en su edición 2021, encabezado por Salvador Estrada González, Presidente Municipal de Zacatecas.

Durante la ceremonia, la titular del organismo público felicitó a los 12 matrimonios contrayentes, de los cuales cuatro fueron igualitarios, quienes realizaron este acto de unión entre dos personas, en donde han prometido formar esta comunidad en base al respeto, igualdad y ayuda mutua.

Domínguez Campos brindó su mensaje como invitada de honor, en donde les manifestó que además de ser esta unión reconocida de manera legal y formal, es un compromiso de vida, amor y lealtad.

Reconoció a la administración pública municipal, por los hechos y actos jurídicos, que han generado avances en la administración del Ayuntamiento de la Capital, en varios rubros y de manera específica en fomentar un mejor desarrollo para las y los zacatecanos.

Por su parte, el Mtro. Salvador Estrada González, presidente municipal, declaró que se ha demostrado que el ayuntamiento capitalino se ha caracterizado por ser una administración incluyente.

Estrada González destacó que con la celebración de estos eventos se da una certeza jurídica al nacimiento de nuevas familias, por lo que pidió apoyar a éstas con respeto y dignidad para la reconstrucción social con amor y fomento de valores.

I.2.9.2. La CDHEZ realiza Foro Planeación Democrática Municipal con perspectiva de Derechos Humanos



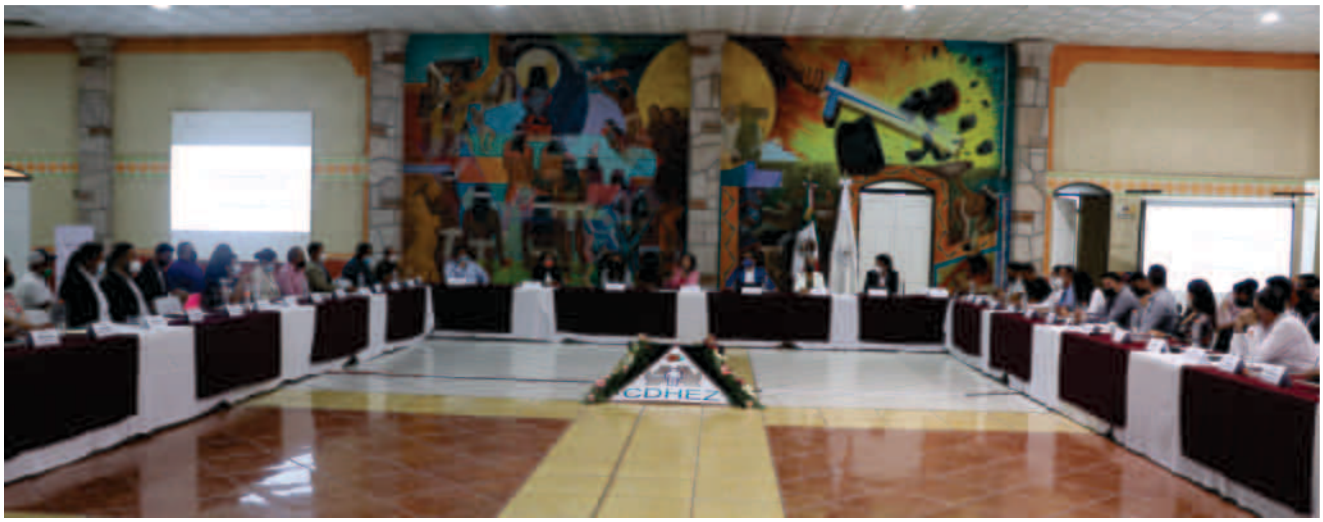
- *La CDHEZ Firma de Convenio de colaboración con los Ayuntamientos del Estado*

Apozol, Zacatecas. - En el marco de del 465 aniversario luctuoso de Tenamaxtle, precursor de los derechos humanos, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) realiza el Foro Planeación Democrática Municipal con perspectiva de Derechos Humanos y la Firma de Convenio de colaboración con Presidentes y Presidentas de los Ayuntamientos del Estado de Zacatecas.

En el uso de la voz, la Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos, titular del Organismo Defensor de los Derechos Humanos le expresó ante las y los presidentes municipales presentes, que con la firma de este Convenio de Colaboración asumen el compromiso de respetar, promover, proteger y garantizar los derechos humanos de las mujeres, hombres, niños, niñas y adolescentes que viven en sus municipios.

Por ello expresó que, un aspecto trascendental para el desarrollo municipal es el Plan Municipal de Desarrollo, por lo que se espera que cuando se formule, sean contempladas políticas, programas, estrategias y acciones que coloquen en el centro a las personas a sus derechos, teniendo como objetivo principal la realización de los derechos humanos. Además, que de dicho plan municipal de desarrollo se pueda desprender un Programa Municipal de Derechos Humanos que permita hacer efectivos los derechos y las obligaciones de respetar, proteger, promover y garantizar que a las administraciones municipales les corresponde cumplir.

La Dra. Ma. de la Luz Domínguez expresó a los Presidentes Municipales, Presidentas Municipales e integrantes de los Ayuntamientos presentes que, tienen en sus manos la protección, respeto y garantía de un derecho fundamental como lo es el derecho a la Paz, a través de las acciones en



Seguridad Pública Municipal, quienes tienen la enorme tarea, en el ámbito de su competencia, de salvaguardar la vida, la integridad, el patrimonio, los bienes y derechos de los ciudadanos, "son ustedes una pieza clave para lograr la pacificación del país".

La Ombudsperson exhortó a los alcaldes a que no defrauden a quienes depositaron en ellos su voto y su confianza, y por el contrario logren la aprobación del resto de la sociedad, por ello aseguró que es indispensable impulsar procesos de planeación democrática y participativa, presupuestación y actuación pública con enfoque basado en los derechos humanos, mismo que les permitirá cumplir las expectativas ciudadanas y dar respuesta a esas demandas sociales.

Domínguez Campos afirmó que la sociedad tiene sentada su esperanza en sus gobiernos, por lo que esperan que la paz, tranquilidad y armonía regrese a las comunidades, a las colonias y a los barrios de cada uno de los municipios del estado, por ello los exhortó a trabajar intensamente en esta tarea, respetando los derechos humanos y el marco jurídico estatal, nacional e internacional.

Indicó que espera que se instalen lo más pronto posible la Comisión de Honor y Justicia en cada municipio, que permita regular la actuación de los elementos policiacos y con ello salvaguardar la protección de los derechos humanos de la población, ya que son las autoridades más denunciadas ante la CDHEZ, siendo que durante este año se han recibido 219 quejas contra elementos policiacos de las cuales 65 fueron presentadas en contra de policías municipales, siendo las detenciones arbitrarias el principal motivo de queja.

Además, indicó que seguirán revisando las condiciones de infraestructura, personal y normatividad de los Separos Preventivos y se orientarán para su mejoramiento, a efecto de evitar violaciones a derechos humanos al interior de los mismos y enfatizó la necesidad de contar con Reglamento de Separos Preventivos Municipales, que regule el procedimiento y la estancia de las personas que son detenidas por haber presuntamente cometido una infracción administrativa o un delito, así como la elaboración de otros Reglamentos Municipales.

Añadió que este evento se realizó en tierras caxcánas, donde nace Tenamaxtle, reconocido como el Precursor de los Derechos Humanos en América Latina durante la conquista española, al exigir respeto a la dignidad humana de los

naturales, respeto a la libertad, integridad, vida y propiedad indígena; exigencias planteadas mucho antes de la existencia de la Declaración de los Derechos Humanos del Hombre y del Ciudadano o de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por lo que aseguró que "si alguna región de México debiera exigir las disculpas de los españoles invasores, debiera ser esa región, la Cuna de los Caxcánes".

En la bienvenida, la T.S.A. Gabriela Arellano Quezada, Presidenta Municipal de Apozol agradeció a la Comisión de Derechos Humanos la realización de éste Foro Planeación Democrática Municipal con perspectiva de Derechos Humanos y la Firma de Convenio, en la tierras donde nació Tenamaxtle, por lo que, invitó a las y los Presidentes Municipales, así como a representantes de los Ayuntamientos, a tener en cuenta que todos los seres humanos somos portadores de la herencia cultural, y debe de ser fortalecida, desde las trincheras en la que cada uno represente.

A través de un video mensaje, el Mtro. José Luis Calderón Ríos, titular de la Dirección de Políticas Públicas de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), y a nombre del Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Dr. Alejandro Encinas Rodríguez, como testigo de honor celebró la signa de este convenio como un compromiso serio y real que establecen las personas que encabezan los Ayuntamientos del estado de Zacatecas, para avanzar progresivamente por un México en el cual a nadie les violen sus derechos humanos.

Durante el Foro el Mtro. Rafael Cortés Gómez, Coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal de la SEGOB y el Mtro. Carlos Munguía Labastida, Coordinador de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas de Derechos Humanos impartieron capacitación a los Presidentes y Presidentas Municipales sobre el Plan Nacional de Derechos Humanos; la Planeación Municipal del Desarrollo con Perspectiva de Derechos Humanos y Estrategia de vinculación con Municipios.

Los municipios que celebraron el convenio con la Comisión de Derechos Humanos del Estado, a través de las presidentas y presidentes municipales T.S.A Gabriela Arellano Quezada de Apozol; M.T.E. Rosaura Sánchez Bañuelos de



Atolinga; Profr. Mario Adrián Reyes Santana de Genaro Codina; Lic. Julieta Isamar Camacho García de Huausco; Lic. Noé Guadalupe Esparza Martínez de Jalpa; Dr. José Humberto Salazar Contreras de Jerez; Mtra. María del Rosario Moreno Sánchez de Juchipila; Profr. José Guadalupe Silva Medina de Luis Moya; y Dr. Javier García Castañeda de General Francisco R. Murguia.

Así como C. Mónica Rodarte Dávila de Mezquital del Oro; Ing. Ramon Rojas Reynoso de Moyahua de Enrique Estrada; C. José Manuel Jiménez Fuentes de Nochistlán; C. Maule Becerra de la Rosa de Noria de Ángeles; C. Fabiola Rodríguez Saldívar de Susticacán; Lic. Gilberto Martínez Robles de Tabasco; Dra. En Educación Gloria Vanessa Rodríguez García de Tepechitlán; Ing. Salvador Rellano Anaya de Taltenango de Sánchez Román; C. Antonio Rocha Romo de Trancoso; L.C. J. Refugio Avitud Guerrero de Vetagrande; y M.A. Rogelio González Álvarez de Villanueva.

También se contó con la presencia de Síndicos, Síndicas, Regidores, Regidoras, Jueces Comunitarios, Directores de Seguridad Pública como Ing. Agustín Balderas Serrano, Secretario de Gobierno Municipal de Juan Aldama; Lic. Gabriela Rodríguez Rodríguez, Secretaria de Gobierno Municipal de Zacatecas; Lic. Leticia Carrero Ramos, Síndica Municipal de Santa María de la Paz; Lic. Reyna Reyes Bautista, Síndica Municipal de Valparaíso; Profa. Deisy Diana Contreras Silva, Síndica Municipal de Pinos; Lic. Sándra Yanet Correa Esparza, Síndica Municipal de Tepetongo; Lic. Nidia Paola Calvillo Delgadillo, Síndica Municipal de Loreto; María Imelda Bocardo, Regidora de Miguel Auza; Janet Gómez Rogero, Regidora de Morelos; Esequiel Martínez R., Juez Comunitario de Trinidad García de la Cadena; y Lic. Juan Manuel Torres Maldonado; Coordinador de Asesores del Ayuntamiento de Guadalupe.



I.2.9.3. La CDHEZ realiza Taller para el Diseño del Plan Municipal de Desarrollo y Elaboración de Indicadores y Evaluación



La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) realizó el Taller para el Diseño del Plan Municipal de Desarrollo y Elaboración de Indicadores y Evaluación, dirigido a las y los integrantes de los Ayuntamientos del Estado de Zacatecas.

Durante la inauguración, la Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la CDHEZ indicó que la institución que encabeza está interesada y comprometida con el desarrollo de los municipios del Estado de Zacatecas, por lo que, con la colaboración de la Secretaría de Gobernación, la Coordinación Estatal de Planeación y la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), se convocó a este taller, para brindarles herramientas metodológicas que permitan incorporar en sus procesos de planeación, presupuestación y actuación el enfoque de derechos humanos que favorezca el cumplimiento de su atribuciones y al respeto de los derechos humanos de la población.

Domínguez Campos indicó que la planeación democrática para el desarrollo municipal, debe colocar a las personas y a sus derechos como el eje central de dicha planeación, además de que todo el proceso de planeación debe diseñarse con una efectiva participación ciudadana, que permita la intervención de todos los actores sociales, económicos, políticos, culturales de cada uno de sus municipios, bajo los principios del respeto a los derechos humanos y sus garantías.

La Ombudsperson resaltó que la CDHEZ ha venido impulsando de manera importante este tema, y recordó la firma de convenio con las y los presidentes municipales, el pasado 15 de octubre para que en sus Planes Municipal de Desarrollo se diseñen, implementen, monitoreen y evalúen, buscando la realización de los derechos humanos a partir de la eficiente prestación de los servicios públicos municipales.

La Presidenta de la CDHEZ señaló que por ello, se convocó al personal de las presidencias



municipales para brindarles elementos en materia jurídica, de diseño, instrumentación, monitoreo y evaluación de la planeación municipal, así como para la elaboración de indicadores y de evaluación por parte de la Secretaría de Gobernación, en la Director General de Políticas Públicas de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.

En su intervención, el Lic. José Luis Calderón Ríos, Director General de Políticas Públicas de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, en representación del Mtro. Alejandro Encinas Rodríguez, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, quien refrendó su compromiso de impulsar el diseño y la ejecución de estrategias, programas y acciones que aseguren que las políticas públicas del ámbito local se ajusten con las disposiciones constitucionales y los tratados internacionales en materia de derechos humanos, teniendo como contexto la publicación del Programa Nacional de Derechos Humanos 2020-2024.

Calderón Ríos detalló que la Secretaría de Gobernación apuesta por materializar los espacios de diálogo y colaboración de la Administración Pública Federal con instituciones locales para garantizar el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales en el país, por lo que son de suma importancia los temas que se abordaran en este taller, ya que son indispensables en la labor que emprenden para diseñar sus programas municipales y que parten de un fuerte compromiso generado con cada una de las personas que habitan sus municipios, para corresponder a la confianza que han conferido en ustedes como autoridades en funciones, para mejorar la situación de derechos humanos en sus territorios.

Mtra. Ruth Angélica Contreras Rodríguez, Coordinadora Estatal de Planeación del Gobierno del Estado, reconoció la presencia y el interés de los presidentes y presidentas municipales, así como los funcionarios de este orden de gobierno para participar en estos talleres, que son fundamentales para la elaboración de sus planes municipales de desarrollo, en donde se integre a la sociedad civil organizada, los tres órdenes de gobierno, la iniciativa privada, la academia y todos los actores que impulsan el desarrollo del estado, de manera integral y con perspectiva de derechos humanos.

Contreras Rodríguez mencionó que la integración de los planes municipales de desarrollo debe elaborarse en los primeros cuatro meses del periodo constitucional del gobierno, mismos que deben considerar como línea transversal todos los elementos desde una perspectiva de derechos humanos, por lo que el día de mañana el señor gobernador David Monreal

Ávila habrá de entregar el Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027 a la Legislatura del Estado para su análisis y aprobación, al ser un elemento importante en relación con los planes municipales de desarrollo y de acuerdo con la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas, pues estos deben vincularse con los planes de desarrollo estatal y federal, procurando siempre una buena coordinación y corresponsabilidad.

Mtro. Marco Antonio Torres, Director de la Unidad Académica de Desarrollo y Gestión Pública de la UAZ explicó que la institución que dirige tiene como misión generar acompañamiento y capacitación a los gobiernos y a las organizaciones civiles para que en su acción pública, puedan tener un mejor impacto. E invitó a los presentes a un diplomado en municipalización, para que tengan una mayor claridad sobre el marco legal municipal, así como en las acciones y estrategias novedosas que pueden realizar en la agenda constitucional y en la agenda ampliada.

Durante el evento, se contó con la presencia de Presidentas y Presidentes Municipales, Síndicas y Síndicos, Regidoras y Regidores, Secretarios y Secretarias del Ayuntamiento, Directoras y Directores de diversas áreas, así como personal administrativo de las presidencias municipales de los municipios de Apozol, Apulco, Benito Juárez, Chalchihuites, Concepción del Oro, Cd. Cuauhtémoc, El Salvador, Enrique Estrada, Fresnillo, García de la Cadena, Gral. Enrique Estrada, Guadalupe, Jalpa, Juan Aldama, Juchipila, Loreto, Luis Moya, Miguel Auza, Momax, Monte Escobedo, Morelos, Moyahua de Estrada, Nochistlán, Noria de Ángeles, Pánuco, Pinos, Río Grande, Santa María de la Paz, Sombrerete, Tabasco, Tepetongo, Tlaltenango, Trancoso, Valparaíso, Vetagrande, Villanueva, Zacatecas, entre otros municipios.



I.2.9.4. Ombudsperson exhorta a Presidentes(as) Municipales a garantizar mejores condiciones laborales a policías



La Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) exhortó a las Presidentas y los Presidentes Municipales a fortalecer las estrategias y acciones para garantizar seguridad a los habitantes en cada municipio. Asimismo, como a mejorar las condiciones laborales de sus elementos preventivos de Seguridad Pública.

En el marco de la Firma de convenio de colaboración entre la CDHEZ y el Ayuntamiento de Río Grande, Zacatecas, la Ombudsperson pidió a las autoridades de los 58 municipios, que proporcionen las herramientas necesarias que faciliten el trabajo tanto de los elementos de seguridad pública municipal como de sus auxiliares.

La Presidenta de la CDHEZ, aseguró que ante la situación que se vive en la entidad y el país en materia de inseguridad, violencia y criminalidad, es indispensable que existan estrategias efectivas que impidan que más ciudadanos sean víctimas del delito, asimismo refirió la urgencia de que, los policías cuenten con equipamiento, capacitación, estrictos controles de confianza y seguro de vida, que permita protegerlos y evitar dejar en la indefensión a las familias.

Además, la titular del Organismo Defensor de los Derechos Humanos llamó a los elementos de seguridad a trabajar bajo protocolos y estándares internacionales con estricto respeto a los derechos humanos, y en caso de detenciones, evitar el uso excesivo de la fuerza y apegarse a la legalidad, ejerciendo su función sin abuso de poder, lo que generará confianza en las corporaciones de seguridad.

Domínguez Campos dijo que es necesario que elementos de seguridad, cuenten con capacitación constante, para dar mayor protección a los

ciudadanos y a su patrimonio, de modo tal que, prevalezca mayor seguridad en el entorno comunitario y ello incremente la credibilidad en la policía.

La firma de convenio celebrado para la promoción, difusión, protección y defensa de los derechos humanos, así como para el fomento de la cultura de la paz en el municipio, fue encabezado por la Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos y el Lic. Mario Córdova Longoria, Presidente Municipal de Río Grande.

En su intervención, la Dra. Ma. de la Luz Domínguez detalló que con este convenio además de establecer compromisos para la impartición de cursos, foros, talleres, conferencias y capacitaciones para los servidores públicos, elementos policiacos; asimismo se brindarán conferencias a estudiantes de diversos niveles académicos que permitirá fortalecer una cultura de respeto a los derechos humanos en la población en general.

La Ombudsperson, solicita que se le imprima una perspectiva de derechos humanos al Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024, para que en el centro de sus acciones estén las personas y sus derechos. Asimismo, añadió la urgencia de la instalación de la Comisión de Honor y Justicia en el municipio, para el reconocimiento de la labor de los elementos, así como aplicación de las sanciones pertinentes en caso de que los policías violenten derechos humanos.

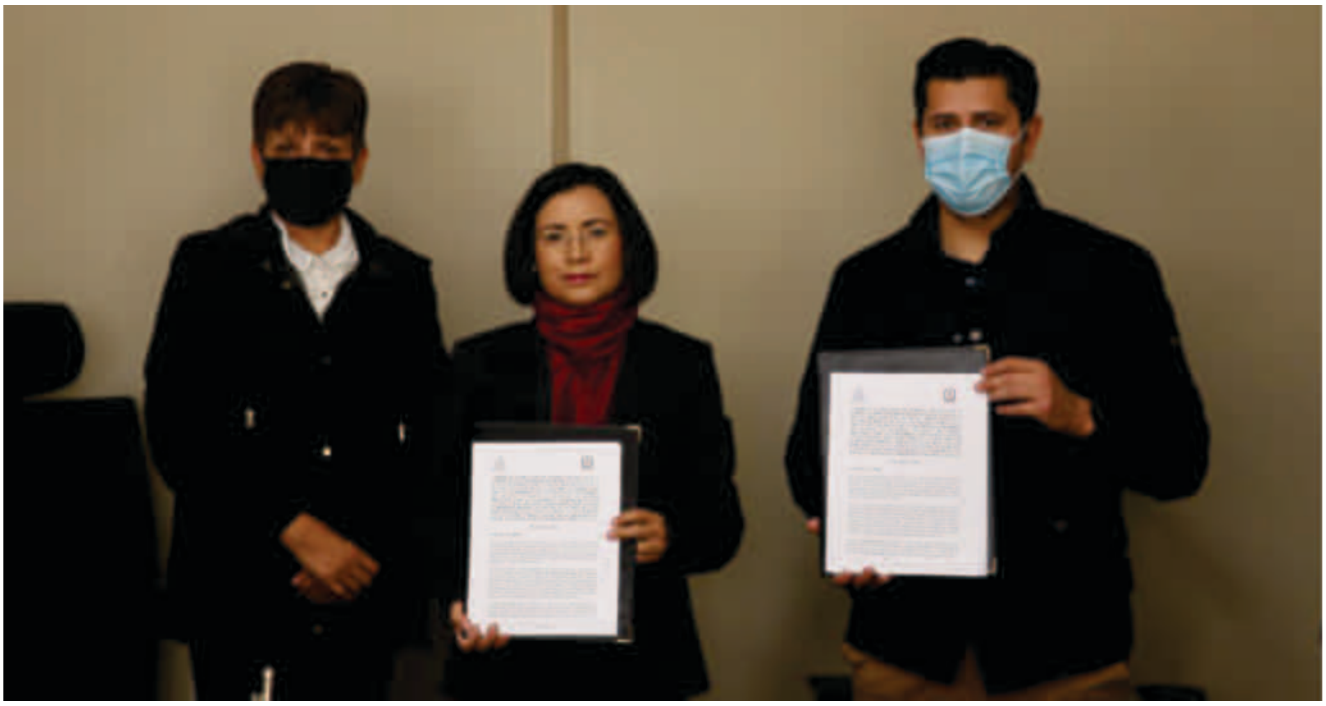
En su intervención, el Lic. Mario Córdova Longoria, Presidente Municipal de Río Grande, aseguró que con este convenio de colaboración, su administración busca fomentar la coordinación entre ambas instituciones para trabajar conjuntamente en favor de los derechos humanos.

Córdova Longoria agradeció a la Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos por su labor en favor de los derechos humanos, y aseguró que implementarán programas y acciones con una visión en derechos humanos, fomentando los valores y los derechos entre la ciudadanía a través de actividades académicas, científicas, culturales, de investigación y actualización.





I.2.9.5. La CDHEZ Y el Ayuntamiento de Guadalupe refrendan compromiso por los derechos humanos



- *Protección Civil Municipal realizará Atlas de Riesgo en escuelas de Guadalupe.*
- *Entregan a la CDHEZ llave del buzón de quejas y Reglamento de Barandilla de la DSPM.*

La Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) y el Mtro. Julio César Chávez Padilla, Presidente Municipal de Guadalupe, firmaron convenio de colaboración para refrendar el compromiso para continuar con el trabajo interinstitucional en materia de protección, defensa, observancia, promoción y difusión de los derechos humanos de las y los guadalupenses.

En su intervención, la Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos destacó que, con la firma de este convenio, el Ayuntamiento se compromete a realizar revisiones en escuelas de educación básica en materia de Protección Civil para identificar riesgos y prevenir accidentes de niñas, niños y adolescentes, mismo que ya se han iniciado con algunas escuelas, ante la gran cantidad de escuelas de nivel preescolar, primaria, secundaria y preparatoria que se encuentran en la demarcación.

La Ombdsperson indicó que esta medida es de suma importancia, ya que, ante el regreso a clases presenciales de niñas y niños, es necesario contar con un Atlas de Riesgo en las escuelas para la prevención de accidentes, a través de una revisión minuciosa por parte de Protección Civil, y con ello evitar hechos como los acontecidos en otro municipio, en donde un niño pierde la vida por falta de estos lineamientos.

Señaló que en la signa de este convenio, se solicita al Ayuntamiento de Guadalupe, que en el Plan Municipal de Desarrollo se tenga una

perspectiva de derechos humanos, y que se traduzca de manera específica en objetivos, como el relativo a fortalecer una cultura de derechos humanos, a través de la promoción y respeto de los derechos humanos en el municipio, tanto en los servidores públicos y las servidoras públicas, así como en la población en general a través de conferencias, talleres, foros y diferentes encuentros y diálogos a través de los Comités de Participación Social y las Delegaciones Municipales.

Durante el acto protocolario, se le hizo entrega de manera simbólica a la Dra. Ma. de la Luz Domínguez, las llaves del buzón de quejas y el Reglamento de Barandilla, como parte del cumplimiento las observaciones emitidas a los separos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal en el que detalla de manera puntual cuál será el procedimiento para aquellas personas que fueran detenidas por la presunta comisión de una infracción administrativa.

Domínguez Campos solicitó el fortalecimiento de las capacitaciones en derechos humanos especialmente a los elementos de seguridad pública, y además se establezca la verificación de que los servidores públicos y servidoras públicas, cumplan con sus atribuciones con estricto apego a la legalidad y respeto a los derechos humanos de las y los ciudadanos, y en aquellos casos en que existan violaciones a los mismos, se realicen los procedimientos de investigación objetiva, diligente y efectiva para que puedan sancionar conforme a derecho y por supuesto, que haya la reparación integral por los daños causados a las víctimas.

Por su parte, el Mtro. Julio César Chávez Padilla, Presidente Municipal de Guadalupe, reconoció la labor de la Dra. Ma. de la Luz Domínguez al frente de la CDHEZ durante estos dos periodos que la Legislatura tuvo a bien conferirle, donde han podido coincidir para coordinares en la realización de acciones en favor de los derechos humanos del municipio de Guadalupe y de la ciudadanía en general.

Chávez Padilla reconoció a la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en la entidad, porque las acciones afirmativas que ha encabezado en favor de los derechos humanos, han sido punta de lanza y ha estado a la vanguardia en diversos estados de la República, en donde se han implementado dichos ejercicios.

Durante el evento, se contó con la presencia de la Lic. María de la Luz Muñoz Morales, Síndico Municipal de Guadalupe, el Lic. Eleazar Moisés Limones Venegas, Secretario de Gobierno Municipal y el Lic. Diego Varela de León, Director de Seguridad Pública Municipal.



I.2.9.6. Firman convenio la CDHEZ y el Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas



La Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) y el Lic. Saúl Monreal Ávila, Presidente Municipal de Fresnillo firmaron un convenio de Colaboración para la protección, promoción y difusión de los derechos humanos en El Mineral.

En un acto protocolario, la Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la CDHEZ destacó la importancia de que todas las acciones, planes, programas, presupuestos y políticas públicas de los gobiernos coloquen en el centro de su actuación a las personas, el respeto a sus derechos humanos y su bienestar social.

La Presidenta de la CDHEZ dio a conocer que con este documento se estable el compromiso para la creación del enlace o área de Derechos Humanos en el Municipio, el cual tendrá apoyo de la institución defensora de derechos humanos, para el seguimiento de quejas en materia de derechos humanos.

Domínguez Campos indicó que como parte de las acciones que establece el convenio de colaboración se impartirán capacitaciones para el personal administrativo como para los elementos de seguridad pública municipal.

La Ombudsperson añadió que, como parte de las jornadas de capacitación, se contempla la promoción de los derechos humanos en la población en general, especialmente en las escuelas de nivel preescolar, primaria y secundaria, con la finalidad de fomentar una cultura de la legalidad, cultura de la paz y cultura de derechos humanos.

Además, dijo que se impartirán acciones en materia de promoción de los derechos huma-

nos con el sector empresarial en Fresnillo, para que desde su esfera contribuyan con la divulgación de los derechos entre la población en general.

Por su parte, el Presidente Municipal de Fresnillo, el Lic. Saúl Monreal Ávila ratificó su compromiso para reforzar las acciones que se realizan desde el Ayuntamiento, para la protección, garantía y promoción de los derechos humanos en favor de las y los fresnillenses.

Monreal Ávila sostuvo que atendrá de manera puntual todas las quejas y recomendaciones que la Comisión de Derechos Humanos del Estado notifique al Ayuntamiento de Fresnillo, Zac.



I.2.10. Instituciones educativas.

I.2.10.2. La CDHEZ y la UNID Zacatecas firman convenio de colaboración



La Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) y la Dra. Saraí de la Torre Flores, Rectora de la Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID) campus Zacatecas firmaron un convenio de colaboración para la promoción, difusión y estudio de los derechos humanos.

En su intervención la Dra. Ma de la Luz Domínguez, titular del organismo defensor de los derechos humanos resaltó la importancia de celebrar convenios con las instituciones educativas, ya que son las instancias que se encargan de la formación de las y los estudiantes del estado de Zacatecas, misma que debe de estar vinculada al conocimiento pleno de los derechos humanos.

Domínguez Campos aseguró hoy en día la educación en derechos humanos, es considerada el conjunto de actividades de formación y difusión de información orientada a crear una cultura de respeto a los derechos humanos, por lo que el objetivo de este convenio es lograr que en cada una de las 10 licenciaturas que tiene la UNID se logren implementar objetivos y ejes para el conocimiento pleno de los derechos humanos.

Indicó que una educación en derechos humanos eficaz no solo proporciona conocimientos sobre los derechos humanos y los mecanismos para protegernos, sino que además desarrolla las competencias y aptitudes necesarias para promover, defender y aplicar los derechos humanos en la vida cotidiana.

Agregó que la educación en derechos humanos suscita un comportamiento y práctica que promueve los derechos para todos los miembros de la sociedad, por lo que la CDHEZ busca con este tipo de convenios con instituciones de educación superior, que no solamente se brinden esos conocimientos en las licenciaturas y posgrados, sino lograr que las y los jóvenes apliquen de manera irrestricta esos conocimientos en su vida cotidiana, tanto en el ámbito laboral como familiar, social y comunitario.

La Ombudsperson indicó que las y los jóvenes que estarán acudiendo a la Comisión de Derechos Humanos a realizar sus prácticas profesionales o servicio social, van a ser partícipes de un proyecto en materia de capacitación integral en los municipios del estado tanto en los ayuntamientos, en las colonias, barrios y comunidades, así como en las escuelas primarias, secundarias y preparatorias.

La Presidenta de la CDHEZ sostuvo que las actividades de educación de derechos humanos deben fomentar los valores fundamentales como es el respeto, la igualdad, la justicia, el derecho a la integridad personal y sobre todo, el derecho al respeto a la dignidad humana.

En el uso de la voz, la Dra. Saraí de la Torre Flores, Rectora de la UNID agradeció a la Dra. Ma. de la Luz Domínguez por la firma del convenio, que permitirá el desarrollo profesional de las y los estudiantes, ya que es importante para la institución que representa que las y los jóvenes apliquen en las áreas laborales lo aprendido en las aulas.

De la Torre Flores aseguró que es un gran compromiso para sus estudiantes, ya que podrán formar habilidades, en competencias que a fin de cuentas los conviertan en profesionales competitivos, y dijo estar segura que de la mano de la Presidenta y del personal de la Comisión de Derechos Humanos, realizarán un extraordinario trabajo.



I.2.10.2. La violencia de género puede y debe prevenirse: Presidenta de la CDHEZ



La Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) impartió una Conferencia de manera virtual a las alumnas, alumnos y docentes de la Benemérita Escuela Normal Manuel Ávila Camacho, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de Violencia contra las Mujeres.

La Presidenta de la CDHEZ señaló que a pesar de que la violencia por razones de género es generalizada, y no distingue raza, estratos sociales, económicos o culturales, esta puede y debe prevenirse, por lo que invitó a los presentes a promover el respeto a los derechos humanos de las estudiantes y docentes, para evitar que sean víctimas de algún tipo de violencia.

Domínguez Campos llamó a las autoridades de la institución educativa, a crear los protocolos de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de Casos de violencia en contra de las Mujeres, mismos que deberán de establecer las medidas urgentes de protección, el acompañamiento de la persona que presente su queja y el seguimiento en la investigación y en su caso, sanción, así como la reparación integral al daño causado.

I.2.11. Vinculación con la Sociedad Civil

I.2.11.1. Participa Ombudsperson en la jornada de trabajo “Sigamos por la Ruta, hacia una Ley Nacional de Trabajo Social”



La Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) participó en la jornada de trabajo “Sigamos por la Ruta, hacia una Ley Nacional de Trabajo Social” convocado por Federación Nacional de Colegios de Trabajo Social en México en el marco del Día Nacional de las y los Trabajadores Sociales en México.

En el marco de la conmemoración del Día de las y los Trabajadores Sociales en México, la Dra. Ma. de la Luz Domínguez expresó que, contar con una Ley de Trabajo Social, es necesaria para garantizar los derechos de las personas a quienes el Estado debe asegurar una atención integral a través de profesionales competentes e idóneos, para fortalecer, atender, contener y revertir las crecientes problemáticas sociales, económicas y de salud que enfrentamos en la actualidad.

La Ombudsperson destacó la labor de las y los trabajadores sociales quienes son profesionales capaces de realizar diagnósticos sociales y programas que integren aspectos relacionados con la economía, sociología, filosofía, historia, administración pública, pedagogía o psicología, entre otras, siendo multi e interdisciplinares, y de quienes se destaca la necesidad de su labor tanto en el sector público como en el privado.

Recordó que la Comisión de Derechos Humanos que preside, elaboró el libro Situación Social y de Maltrato en Personas Adultas Mayores en Zacatecas, mismo que presenta un panorama general sobre la situación social, y que detalla la situación de maltrato, grado y frecuencia que sufren las y adultos mayores, visibilizando la necesidad de personal médico, de enfermería, trabajo social y diversas áreas especializadas en atención geriátrica en el ámbito público, privado y social.

Detalló que el envejecimiento es la etapa de la vida de las personas, en donde se producen cambios biológicos, físicos, psíquicos y sociales y no por ello debe significar abuso, abandono, discriminación, explotación, negligencia, violencia; sobre todo en esta etapa en la que enfrentamos las condiciones de aislamiento ante la pandemia producida por el COVID-19.

Domínguez Campos señaló que ante este panorama se observa, que las personas de la tercera edad son olvidadas por sus familiares, pero también por los gobiernos, al no existen suficientes políticas públicas que garanticen el goce y ejercicio de los derechos y libertades de este sector de la población. Por lo que reiteró la urgencia de que exista un Instituto Estatal de las Personas Adultas Mayores en Zacatecas, que tenga por objeto la aplicación de las políticas, programas, estrategias, acciones y mecanismos a favor de las personas de la tercera edad.

Durante la jornada de trabajo "Sigamos por la Ruta, hacia una Ley Nacional de Trabajo Social" Larry Emil Alicea Rodríguez, el Presidente de la Región de América Latina y el Caribe de la Federación Internacional de Trabajo Social (FITS LAC) indicó que la necesidad de contar con una Ley de Trabajo Social es jerarquizar la profesión en el país y darle una formalidad al proceso de ejercerla, además de incidir sobre los derechos profesionales de las y los trabajadores sociales, ya que se reconoce cuáles son sus competencias, la preparación necesaria para el desempeño de su actividad, así como las atribuciones privativas del trabajo social y con ello brindar un marco legal de protección a los y las trabajadoras sociales.

El representante de los 17 países que compone la región de América Latina y el Caribe de la Federación Internacional de Trabajo Social, enfatizó que la presencia de una Ley Federal en México, es una herramienta que mejora y defiende los derechos de las personas que interactúan con las y los trabajadores sociales en su ejercicio profesional, incidiendo en una calidad de la prestación de los servicios sociales que se brindan a través de los profesionales en el ramo.

En su intervención, la Dra. Olga García Rendón Presidenta de la Asociación Mexicana de Instituciones Educativas de Trabajo Social, destacó la creación del proyecto de Ley de Trabajo Social en México, con lo que visibilizará y reconocerá la labor de los trabajadores sociales, que en medio de la pandemia han trabajado de la mano de otros profesionales.

García Rendón dijo que éste es un proceso de inclusión de muchas personas que estarán integrándose a la actividad del trabajo social en México, que ante los intentos que se han realizado, hoy con alegría ve que se encuentran cerca de lograrlo "porque juntos somos más fuertes".

En el evento realizado de manera virtual, se contó con la presencia del Dr. Jesús Acevedo Alemán, Director de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Autónoma de Coahuila; Lic. Martin Castro Guzmán, miembro y presidente de la Academia Nacional de Investigación en Trabajo Social; Mtra. Leticia Ramos Castañeda, ex Directora de la Escuela de Trabajo Social en Zacatecas y socia fundadora del Colegio de Zacatecas; Mtro. y T.S. Domingo Rico Maldonado Rodríguez, docente de la Universidad Autónoma de Chihuahua; y el MTS. José Ignacio Maldonado Aguilar, Coordinador Académico de la Licenciatura en Trabajo Social y la Licenciatura en Criminología de la Universidad de Potosí.

I.2.11.2. Revisa Ombudsperson medidas para prevenir COVID-19 con sector empresarial



La Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) sostuvo reunión con las y los presidentes de las cámaras empresariales para analizar las medidas para prevenir el contagio de virus Sars-CoV2 (COVID-19) el marco de la legalidad y el respeto a los derechos humanos.

En su oportunidad, la titular del organismo defensor de los derechos humanos en la entidad reconoció el esfuerzo del sector empresarial, en su interés en coadyuvar en la protección de la salud de la población zacatecana.

En la reunión estuvieron presentes Sara Abigail Hernández Urenda, Presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA) en Zacatecas; Francisco Javier Flores López, Presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Zacatecas (CANACOZAC).

Así como Angélica Mendoza en representación de Raúl Muñoz del Cojo, Presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Zacatecas; Roberto Pascual González Ramírez, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Zacatecas; y Salvador González García, Presidente de la Asociación de Mineros de Zacatecas A.C.

La titular de la CDHEZ consideró que la propuesta de solicitar el certificado de vacunación a los comercios, fue presentada con una muy buena intención, con muy buena fe, con un objetivo loable de lograr que la población fundamentalmente joven se vacune, sin embargo, explicó que existen factores importantes a analizar a la luz de la legalidad, los derechos humanos y factores externos a la población que no está en sus manos resolver.

Durante la mesa de diálogo entre las cámaras empresariales y la Ombudsperson abordaron temas como la accesibilidad de las vacunas

para la población en general, así como la discriminación o trato desigual en las personas basado en tener o no un certificado de COVID-19, lo que pudiera causar estigmatización y divisiones sociales.

Señaló que, no hay disponibilidad de vacunas suficientes en el país ni en el estado, e incluso a nivel mundial no es lo suficientemente acelerada su producción, es por ello que el Gobierno Federal envía los lotes de vacunas de acuerdo al grupo de edad y no le es aplicada a las personas que no le correspondan conforme a la Estrategia Nacional de Vacunación.

Indicó que el desarrollo de certificados de COVID-19 debe ser parte de una estrategia global, basada en un enfoque multilateral y la cooperación internacional que permita a los estados aceptar los certificados de los demás, ya que hay ciudadanos que tuvieron la oportunidad de vacunarse en otro país, y no contarían con un certificado como el que proporciona la Secretaría de Salud.

Por lo anterior, en dicha reunión se acordó trabajar en conjunto en intensas campañas para la concientización de la población que permita informar de manera objetiva, imparcial y oportuna de los beneficios de la vacunación, las características de cada vacuna y sus efectos positivos.



I.2.11.3. Participa Domínguez Campos en la entrega del Premio Gachita Amador



La Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) participo en la entrega de la presea Gachita Amador al Mtro. Jesús Sánchez Meza del Grupo Matatena, originario de Chiapas, en el marco del Séptimo Fandango Internacional de Arte Infantil "Gachita Amador" en su edición 2021.

Durante su intervención, la Dra. Ma. de la Luz Domínguez reconoció la labor del Mtro. Jesús Sánchez, al recibir el premio que se les dedica a los artistas destacados que figuran por su trabajo en el arte y la cultura por la niñez de México, y quien previamente presentó una obra infantil en la que las niñas y niños pueden interactuar y ser parte del cuento.

Domínguez Campos enfatizó que los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes, y que los derechos culturales son, al igual que los otros derechos humanos, expresión y exigencia de la dignidad humana.

Al recordar la obra presentada por el galardonado, señaló que los derechos culturales han sido reivindicados principalmente en el contexto de los derechos de los grupos prioritarios y en el caso de México, de nuestros pueblos originarios como lo son los pueblos indígenas, mismo que es esencial garantizarlos de manera universal para todas las personas.

Por su parte, el Mtro. Martín Letechipia, organizador de este evento, detalló que este fandango internacional busca el fomento de la cultura en las niñas y niños a través de actividades de narración oral, obras de teatro, presentaciones de títeres y actividades académicas.

Comentó que en esta edición Participarán 73 promotores culturales, de los cuales 15 son nacionales, un internacional y 57 locales, de las cuales el 90 por ciento de las actividades fueron presenciales y el 10 por ciento restante se realizaron de manera digital, atendiendo los protocolos de atención y prevención por la pandemia por COVID-19.



I.2.11.4. La CDHEZ presenta el mural “Ausencia”, en homenaje a las personas desaparecidas



La Dra. Ma de la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) aseguro que con la presentación del Mural denominado “Ausencia” se hace un homenaje a las víctimas de desaparición de personas y a sus familias, quienes viven con el dolor, la angustia, la zozobra, la desesperación y el profundo sufrimiento de no saber dónde se localiza su ser querido.

Durante la inauguración del Mural de la autoría del Artista Plástico Pablo Chávez Román, la titular del Organismo defensor de los derechos humanos destacó que fue creado este mural en el edificio de la Comisión de Derechos Humanos del Estado para que a nadie se le olvide, y mucho menos a los gobernantes, que esta problemática es real, no es inventada y que debe atenderse de manera urgente y de manera integral.

La Dra. Ma. de la Luz Domínguez lamentó la crisis de desaparición de personas que se padece en Zacatecas, ya que existen más de 2 mil 313 personas desaparecidas de 1964 a agosto de 2021, de las cuales aún no son localizadas mil 392; además, se han localizado más de 337 fosas clandestinas del 2015 al 2021, en las cuales se han encontrado más de 243 cuerpos de los cuales, muchos aún no están identificados, lo que impide que sus familias accedan a la justicia, a la verdad y a la reparación integral.

Enfatizó que nunca más podrá ignorarse la desaparición de personas, porque cuando





pasen por aquí las autoridades y servidores públicos del Poder Ejecutivo Estatal, del Poder Judicial del Estado, de la Fiscalía General de Justicia del Estado, del Poder Judicial Federal, del Instituto de la Defensoría Pública, de la Comisión Local de Búsqueda, de la Comisión de Víctimas y demás instancias del gobierno, van a ver los rostros de Zacatecanos y Zacatecanas, de Mexicanos y Mexicanas que vivos se los llevaron y vivos los queremos de vuelta. Porque van a ver a Zacatecanos y Zacatecanas que no han sido localizados y en muchos casos tampoco han sido buscados con debida diligencia.

Domínguez Campos señaló que no debe existir nunca más una política simulada, un discurso vano, una justificación evasiva para no prevenir, investigar, sancionar y erradicar los delitos en materia de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares en este estado y en este país.

Agregó que por ello es fundamental la coordinación interinstitucional entre las autoridades e instancias federales, estatales y municipales y conjuntamente localicen a las víctimas y se prevenga para que no existan más personas desaparecidas, se deben destinar los recurso humanos, financieros y materiales suficientes.

Señaló como urgente la necesidad de implementar una auténtica política pública en materia de desaparición de personas en Zacatecas, que cumpla a cabalidad con las disposiciones de la Ley General de Desaparición Forzada, Desaparición cometida por Particulares y Sistema Nacional de Búsqueda, así como la Ley Local en Materia de Desaparición de Personas, y la Ley que establece el procedimiento de Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas lo que debe traducirse en una eficiente localización de personas.

Así como el adecuado funcionamiento de la Comisión Estatal de Búsqueda, la cual debe contar con los recursos materiales y financieros suficientes, así como personal profesional y técnicamente capacitado, y con ello, la Dra. Ma. de la Luz Domínguez dijo que es importante que el Poder Legislativo del Estado asigne en el Presupuesto de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2022, una partida presupuestal para el Fondo Estatal de Desaparición, porque la desaparición de personas no es un asunto que pueda esperar.

La Presidenta de la CDHEZ puntualizó que las autoridades de procuración de justicia deben realizar investigaciones prontas, expeditas, con

debida diligencia, perspectiva de género y perspectiva de derechos humanos, que permita localizar con vida a las víctimas, identificar a los responsables, a efecto de que sean detenidos y presentados ante las autoridades jurisdiccionales y que sean sometidos al procedimiento penal correspondiente y en su momento procesal oportuno, sean sancionados conforme a la ley.

La Ombudsperson aseguró que la Comisión de Derechos Humanos seguirá vigilante de que la Fiscalía, Comisiones de Búsqueda y de Víctimas, así como de las instituciones de Seguridad Pública realicen sus funciones garantizando la protección integral de los derechos de las personas desaparecidas hasta que se conozca su suerte o paradero, además se brinde la atención, asistencia, y en su caso, la reparación integral y garantías de no repetición de conformidad a las disposiciones legales vigentes.

Ratificó su compromiso para seguir brindando a los familiares de personas desaparecidas acompañamiento, asesoría jurídica y psicológica, así como emitiendo las Recomendaciones que sean necesaria para que esclarezcan los hechos, se conozca la verdad, se brinde a las víctimas la ayuda, atención, asistencia, acceso a la justicia y reparación integral que merecen.

En su intervención, el artista plástico Pablo Chávez Román, autor del Mural "Ausencia" indicó que esta obra es una expresión de solidaridad a las familias de las personas desaparecidas, en donde se visualiza el rostro de una madre señalando los pasos de la búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa plasmados en un libro, además de la representación de los rostros de personas desaparecidas del estado de Zacatecas.

En el uso de la voz, el Diputado Federal Omar García, quien es uno de los sobreviviente Ayotzinapa, reconoció la lucha de los colectivos de familiares de personas desaparecidas, que han realizado por su cuenta en vista de que las autoridades no ha hecho su trabajo, y que en diferentes lugares del país, han tenido que salir a buscar fosas clandestinas a pico y pala.

Agradeció que se mantengan en la memoria a los 43 estudiantes de Ayotzinapa, quienes fueron sus compañeros, como un acto que



abona a la memoria histórica y que sepan qué pasó algo terrible con 43 jóvenes o con miles de hombres y mujeres en todo el país, porque esta problemática no distingue estratos sociales.

En su mensaje, la Lic. María Susana Montello Mercado, en representación de la Dra. María de Jesús Muñoz Reyes, Directora del Instituto Zacatecano de Cultura "Ramón López Velarde" explicó que con este mural el arte se apropia de los espacios, para generar conciencia de la problemática que aqueja a la sociedad, como lo es la desaparición de personas, y con ello generar obras que inspiran y humanizan de manera directa y tangible el sentir de quienes viven esta batalla, "una batalla de todos, y que desde nuestras trincheras tenemos que combatir".

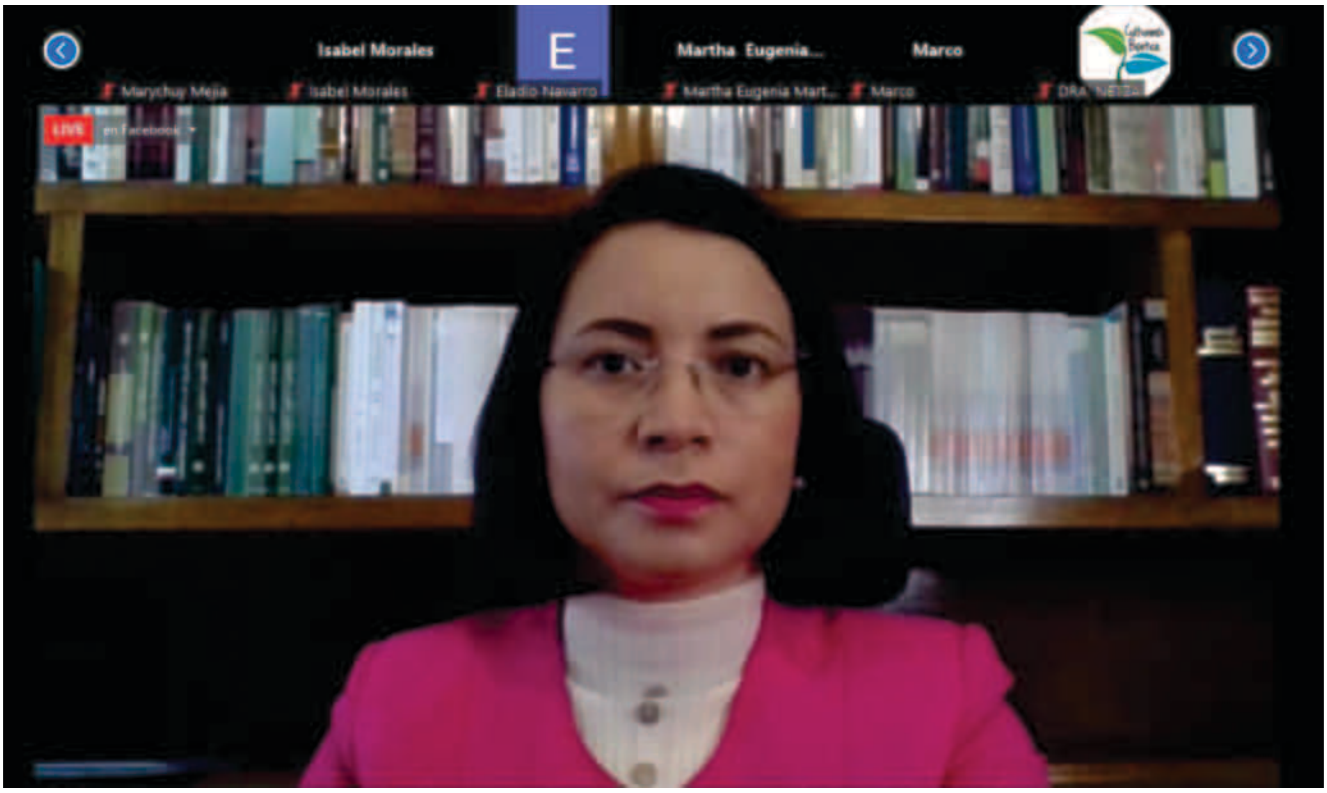
La Señora Guillermina Camacho de la Serna, madre de persona desparecida manifestó que las personas desparecidas tienen el derecho a ser localizadas, y exigió a las autoridades que busquen la estrategia y las políticas para dar con los desaparecidos, y para que no se repita, porque es muy doloroso para todos y todas.

La Señora Guillermina agradeció a la Comisión de Derechos Humanos por la presentación del mural porque representa la ausencia de sus seres amados, el cual les da la esperanza de que en algún momento los identifiquen y puedan cumplir con su deseo de verlos de regreso "como sea, pero los queremos de regreso".

Por su parte, el Mtro. Ricardo Bermeo Padilla, Coordinador del Mecanismo de Búsqueda de Personas en el Estado, pidió a la sociedad en general a no recurrir en la estigmatización, desde "en algo andaría" hasta la normalización de "estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado", como un mecanismo de ver la problemática en la se vive y evitar el cuestionamiento de las terribles causas que este terrible problema causa a la sociedad.



I.2.11.5. Lamentable que se violente la dignidad humana de los migrantes: Domínguez Campos



En marco del IV Congreso Nacional de Bioética y X Aniversario del Consejo Estatal de Bioética, la Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) lamentó que la política migratoria en México, sea en esto últimos tiempos una política violatoria de la dignidad humana, ya que se violentan los derechos de las y los migrantes, pero además ha sido violatoria de instrumentos jurídicos internacionales.

La Ombudsperson dijo que se ha visto como elementos de seguridad han golpeado niñas, niños, mujeres y hombres migrantes, con la justificación de que no se encuentran de manera regular en el país, siendo personas que solamente tienen el deseo de migrar en buscar mejores condiciones de vida para ellos y sus familias.

Señaló que lamentablemente, organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas ha realizado llamados al gobierno mexicano para cambiar la política migratoria, porque no solamente se afecta su derecho al libre tránsito, si no también se afectado su derecho a la salud, su derecho a la alimentación y su derecho a una estancia digna, porque los migrantes cuando han llegado a la frontera sur de México, son recibidos brutalmente por elementos policiacos, y quienes han podido llegar a algún albergue, no tienen medicamentos, alimentación, o una estancia digna para estar pendientes respecto a la determinación del gobierno mexicano en que se les sea otorgada su situación migratoria o una condición de asilo político o de refugiados.

Durante el congreso celebrado de manera

virtual, impartió una conferencia titulada "La Dignidad Humana y los Derechos Humanos", en donde resaltó que no se deben anteponerse intereses económicos, políticos o personales al respeto, protección y garantía de la dignidad humana, en ningún ámbito, incluido el ámbito de la investigación científica y tecnológica e innovación.

La Dra. Ma. de la Luz Domínguez señaló que nunca será justificado sacrificar la "dignidad humana" a cambio del progreso de la ciencia o de un nuevo descubrimiento, ya que la "dignidad humana" se constituye en un límite infranqueable a determinadas prácticas que resulten vejatorias, degradantes o atentatorias contra la propia esencia de la condición humana, este límite debe ser reconocido y aplicado independientemente si se encuentra previsto en la Constitución o Carta magna de alguna nación.
En su ponencia, la titular del Organismo Defensor de los Derechos Humanos enfatizó que la dignidad humana debe ser considerada como un derecho humano, como un derecho fundamental establecido en las Constituciones de los países, sin embargo, lamentablemente no todas las Constituciones la contemplan.

Domínguez Campos aseguró que si no se respeta la dignidad humana en todos los ámbitos, social, económico, cultural, político, comunitario y familiar, no puede la persona disfrutar sus demás derechos como a la salud, a la educación, a la justicia, a la seguridad jurídica, entre otros, por ello no es una simple declaración ética, sino que es una norma jurídica que consagra un derecho fundamental a favor de la persona y por el cual se establece el mandato constitucional a todas las autoridades, e incluso particulares, de respetar y proteger la dignidad de todo individuo, por ello no puede ser tratada como objeto, o ser humillada, degradada, envilecida o cosificada.

Indicó que la dignidad es un derecho humano intrínsecos a toda persona por el mero hecho de pertenecer al género humano, indispensables para el disfrute de la vida, mismo que está contemplado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Tratados Internacionales y debe de ser acogida por las constituciones de los demás países, ya que lamentablemente no todas las Constituciones las contemplan, y debe de ser aplicado.

Finalmente, señaló que falta mucho por legislar en materia jurídica en el respeto y garantía de la dignidad humana, y que observamos como cotidianamente se sigue vulnerando en los ámbitos sociales, educativo, familiar, cultural y económico, y es indispensable que se reconozca como un derecho fundamental en las distintas legislaciones de los estados y particularmente que sea aplicado en todos los ámbitos incluidos en los ámbitos científico, tecnológico y de innovación.

Desatacó la importancia de promover el valor del respeto a la dignidad humana en los distintos ámbitos, para que más allá de los intereses económicos, culturales, políticos, comunitarios y familiares, prevalezca el respeto, y con ello logremos tener una sociedad más respetuosa de la dignidad humana, más inclusiva y que promueva el valor de la tranquilidad y la paz, ya que, al ser vulnerada la dignidad humana provoca el conflicto entre personas, entre grupos y entre colectividades.

Por su parte, el Mtro. Edén González Roldan, Director de Administración y Finanzas de la Comisión Nacional de Bioética expresó que la institución que representa ha respaldado y continuará respaldando a la Comisión Estatal de Biótica de Zacatecas que ha participado de manera activa con su labor, por lo que recono-

ció los 10 años de trabajo considerándola entre las mejores de sus pares estatales a nivel nacional.

Refrendó el compromiso de la Comisión Nacional de Bioética para refrendar la protección de los derechos humanos, la salvaguarda de la dignidad de las personas y la generación de las políticas públicas para el mejoramiento de la sociedad.

Este evento fue encabezado, por el Dr. Enrique Argüelles Robles, Presidente del Consejo Estatal de Bioética y contó con la presencia del Mtro. Francisco Javier Madera Maldonado, Director y Secretario Técnico del CEB, el Dr. Hans Hiram Pacheco García, Secretario Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), el Dr. Juan Armando Flores de la Torre, Coordinador de Ciencias de Salud de la UAZ, así como demás integrantes del Consejo Estatal de Bioética.



I.2.11.6. La CDHEZ convoca a participar en el Distintivo de Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad 2021

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) convoca al público en general a proponer a negocios o empresas del sector privado que se distingan por implementar políticas y prácticas de inclusión laboral, para que participen en el Distintivo de Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad 2021.

La Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la CDHEZ dio a conocer que la institución que encabeza emitió la Convocatoria del Distintivo de Inclusión Laboral, con el objetivo de reconocer a las empresas del sector privado de la entidad, que fomenten en sus centros de trabajo el respeto a los derechos humanos y laborales de las personas con discapacidad, su inclusión y la no discriminación.

Domínguez Campos señaló que este distintivo visibiliza las prácticas que tiene el sector privado en torno a la igualdad de oportunidades y de trato hacia las personas con discapacidad en sus entornos laborales, en un marco de responsabilidad social.

Dio a conocer que la convocatoria está abierta para que participen las personas físicas o morales con actividad empresarial del estado de Zacatecas, que representen a uno o varios negocios o empresas del sector privado, en las cuales se hayan implementado políticas y prácticas de inclusión laboral.

La Presidenta del Organismo Defensor de los Derechos Humanos adelantó que el Distintivo de Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad 2021, será entregado en un evento de premiación, a las empresas o negocios que determine el fallo del Jurado Calificador, en el marco del aniversario de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad.

Cabe destacar, que las propuestas deberán ser presentadas hasta el 22 de noviembre de 2021, a las 19:00 hrs., en las oficinas de la Comisión de Derechos Humanos, ubicadas en Circuito Cerro del Gato S/N, Col. Ciudad Gobierno, en Zacatecas, Zac., o enviadas al correo electrónico secretariaejecutiva.cdhez@gmail.com.

Las bases de la convocatoria pueden ser consultada en la página web https://cdhezac.org.mx/ o bien comunicarse al comunicarse al 492 924 14 37 ext. 170, o al 01 800 624 2727, para más información.



I.2.11.7. La CDHEZ convoca al Premio de Estatal de Derechos Humanos "Tenamaxtle 2021"



La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), con el objeto de reconocer la labor que realizan las personas físicas y morales a favor de la promoción, protección y defensa de los derechos humanos, convoca las Organizaciones de la Sociedad Civil, Colegios de Profesionistas y a la ciudadanía en general a participar en el Premio Estatal de Derechos Humanos "Tenamaxtle 2021".

La Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la CDHEZ dio a conocer la convocatoria en la que se invita a los interesados a participar o presentar propuestas de candidatas y candidatos que realizan labores en pro de los derechos humanos en la entidad, para obtener el Premio Estatal de Derechos Humanos en su edición 2021.

La titular del organismo protector de los derechos humanos indicó que las o los interesados deberán presentar sus propuestas de candidatas y candidatos en la Comisión de Derechos Humanos y tendrán que ser dirigidas a la Secretaría Ejecutiva de la CDHEZ, donde se anexará un expediente con los medios probato-

rios y las razones que consideren importantes para respaldar la propuesta tales como: fotografías, videos, testimonios, así como todo aquello que acredite las acciones y méritos de los aspirantes al premio.

Informó que el premio consta de un pergamino, una presea de plata y la cantidad de 20 mil pesos, que serán entregados en la ceremonia de premiación, en el evento conmemorativo del Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Finalmente, señaló que la convocatoria establece que las propuestas se recibirán con fecha límite hasta las 19:00 horas del 30 de noviembre del año en curso, a partir de la publicación de esta convocatoria en las oficinas centrales de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, ubicadas en Circuito Cerro del Gato S/N, Ciudad Gobierno, C.P. 98160, Zacatecas, Zac., o a través de correo certificado.

Añadió que de igual forma se recibirán en las oficinas regionales de esta Comisión, ubicadas en los municipios de Fresnillo, Río Grande, Jalpa, Loreto, Tlaltenango, Jerez, Pinos y Sombrerete, por lo que de requerir mayor información pueden consultar las bases de la convocatoria en la página www.cdhezac-.org.mx y en los teléfonos 492 924 14 37 en la extensión 170, en el número gratuito 800 624 2727 o en nuestro celular de guardia 492 124 77 30.



I.2.11.8. Convocan al Concurso de Cortometraje, Dibujo y Cuento del Festival de Arte, Inclusión y Cultura de Paz 2022



La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), la Asociación Civil "Uniendo Discapacidades con Amor", en coordinación con la Supervisión de Educación Especial Zona Escolar No. 3 de Fresnillo de la Secretaría de Educación, se unen para impulsar los derechos de las niñas, niños y adolescentes a través de la Convocatoria para el Concurso de Cortometraje, Dibujo y Cuento denominado "Construyendo un mundo inclusivo" como parte del Cuarto Festival de Arte, Inclusión y Cultura de Paz 2022.

En conferencia de prensa, la Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos Presidenta de la CDHEZ dio a conocer que el Festival de Arte, Inclusión y Cultura de Paz 2022 se fortalece en esta edición con la adhesión de la Comisión de Derechos Humanos, con el objetivo de que niñas, niños y adolescentes participen y señalen que acciones se implementan o les gustaría que se implementaran en su entorno tanto educativo, comunitario o social en materia de inclusión y el respeto a los derechos humanos de las personas con discapacidad.

Domínguez Campos indicó que en la convocatoria para el concurso "Construyendo un mundo inclusivo", además, es emitida para que las niñas, niños y adolescentes, puedan expresar en un cortometraje, dibujo o un cuento, lo que consideran que se ha creado o qué falta por

hacer en la construcción de una Cultura de Paz, a través de las acciones que se implementan en sus escuelas para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia escolar.

La Ombudsperson explicó que con este concurso se promueven el derecho a la participación de las niñas, niños y adolescentes como sujetos plenos de derechos, ya que su opinión, sus ideas o sentimientos deben ser escuchadas y conocidas por las personas adultas, como sus padres, madres, maestros, maestras, así como por las propias autoridades, para que las acciones gubernamentales, las estrategias, los planes, programas y políticas públicas que se impulsen sean en favor de los derechos de las niñas, niños y adolescentes desde su óptica.

En su intervención, la Mtra. María de los Ángeles Moreno Padilla, Vicepresidenta de la Asociación Civil "Uniendo Discapacidades con Amor" dio a conocer que los resultados del concurso de Cortometraje, Dibujo y Cuento, se darán a conocer en el mes de febrero durante el Cuarto Festival de Arte, Inclusión y Cultura de Paz 2022, por lo que las niñas, niños y adolescentes tienen hasta el 20 de diciembre de 2021 para inscribir sus trabajos.

Moreno Padilla dijo que la Asociación "Uniendo Discapacidades con Amor" pretende instaurar una cultura incluyente, en la cual la sociedad zacatecana se permita enaltecer los valores como la empatía, la comunicación asertiva y el trabajo en equipo, por lo que consideró que de esta manera se puede tener una sociedad inclusiva en el cual todas las personas independientemente de su condición física e intelectual, pueda tener un sentido de pertenencia y vivir sus derechos de una manera plena.

El concurso está dividido en categorías para niñas y niños de preescolar, primaria y adolescentes de secundaria, cuya premiación será el próximo 25 de febrero durante la clausura del Cuarto Festival de Arte, Inclusión y Cultura de Paz, por lo que podrán consultar las bases en la página de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (http://cdhezac.org.mx) y de las redes sociales de la Asociación "Uniendo Discapacidades con Amor".



I.2.11.9. Marcha la CDHEZ en el marco del Día Mundial del SIDA



La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) realizó la 15° Marcha silenciosa en el marco del Día Mundial de la Respuesta ante el VIH y SIDA, con el lema "Poner fin a las desigualdades. Poner fin al SIDA. Poner fin a las pandemias".

El contingente fue encabezado por la Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la CDHEZ, las y los consejeros de la Comisión de Derechos Humanos, la QFB. Karla Guadalupe Escamilla, Pbro. José Manuel Félix Chacón, Lic. Esthela Berrún Robles, Mtra. María del Rosario Arellano Valadez, el Médico Infectólogo y ex Presidente de la CDHEZ, Dr. Arnulfo Joel Correa Chacón, y la Presidenta de la Asociación de la Sociedad Civil "Transformando Vidas", Fernanda Delgado.

Acompañados del personal del Organismo Defensor de Derechos Humanos, la Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos hizo un llamado a las autoridades de los gobiernos estatal y federal, para que existan los recursos humanos, materiales y financieros necesarios y suficientes, para atender de manera inmediata y pronta, a las personas que padezcan esta enfermedad.

Domínguez Campos destacó la importancia del acceso a servicios de salud inmediatos, de que exista el medicamento necesario y se evite el desabasto del mismo, porque con ello no solamente se está garantizando el derecho a la salud, sino también la vida de las personas que tienen esta enfermedad.

La titular de la CDHEZ exhortó también a que se realicen las campañas de prevención del VIH SIDA, incrementándose de manera importante y urgente en toda la población, pero particularmente entre los jóvenes y los adolescentes, uniendo esfuerzos entre la sociedad y gobiernos, para prevenir el contagio de esta enfermedad.

Indicó que este acto se realiza con el objetivo de visibilizar este tema y contribuir a la concientización social, como una fecha fundamental para que la sociedad se una y se apoye a las personas que viven con VIH, así como recordar a las personas que fallecieron a causa de esta enfermedad, y con ello promover una cultura de la no discriminación hacia las personas que tienen este padecimiento, evitando que las personas sean discriminadas en el ámbito laboral, escolar y comunitario.

La Ombudsperson señaló que este año se lleva el lema establecido por la ONUSIDA para poner énfasis en la necesidad de acabar con las desigualdades que atraen consigo esta y otras pandemias en el mundo.

Destacó que es necesario realizar acciones audaces para detener esta enfermedad en medio de las problemáticas que trae consigo el COVID 19 y una crisis económica que va en aumento.

Cabe destacar que la marcha partió de La Alameda "Francisco García Salinas" para concluir en la Plazuela de la Caja del Centro Histórico de Zacatecas.



I.2.11.10. La CDHEZ capacita a periodistas sobre “Recursos de protección para periodistas”



La Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) convocó a las y los periodistas zacatecanos para la Capacitación "Recursos de protección para periodistas" impartida por la organización Artículo 19.

Durante la inauguración que se realizó de manera presencial y a distancia, la Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos destacó la importancia para que los periodistas y comunicadores que trabajan en los medios de comunicación, cuenten con las herramientas y vínculos necesarios y suficientes para sus actividades en la búsqueda de la información del día a día.

La Presidenta de la CDHEZ enfatizó que la institución que encabeza, ha cumplido con su compromiso de protección y defensa de los derechos de las y los periodistas en la entidad, por lo que se han aperturado expedientes por hechos atribuibles a autoridades de seguridad y dado acompañamiento, ya que en el momento de presentarse algún incidente en materia de inseguridad, los compañeros periodistas acuden al lugar de los hechos delictivos a realizar la cobertura periodística y al efectuar el acordonamiento del lugar, los elementos policiacos establecen limitantes para el ejercicio periodístico, fuera de las disposiciones legales, e incluso se han presentado agresiones en contra de los propios reporteros.

Por su parte Paula Saucedo, Oficial del Programa de Protección y Defensa de Artículo 19, expuso herramientas y estrategias que deben utilizar las y los periodísticas en caso de una emergencia durante el ejercicio de su labor periodística, estrategias de autocuidado y recomendaciones para protocolos de seguridad durante viajes o traslados, así como protocolos especializados para periodistas visuales o fotoperiodistas.

Por su parte, Luis Knapp, Coordinador de Defensa del Programa de Protección y Defensa impartió temas sobre Cómo presentar denuncia ante un ministerio público; Qué es la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Contra la Libertad de Expresión; el Protocolo homologado de investigación en delitos de libre expresión; así como los Derechos ante una detención y los Derechos de las víctimas.

Finalmente, la Doctora Ma. de la Luz Domínguez Campos señalo la urgencia de contar con un Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos Estatal que brinde las garantías necesarias para el ejercicio de la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos.



PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

II. Protección y Defensa de los Derechos Humanos

La protección y defensa de los derechos humanos es una cuestión prioritaria prevista en el derecho internacional de los derechos humanos, al reconocer que éstos tienen su origen en la dignidad y el valor de la persona humana, y que ésta, es el sujeto central de los derechos humanos y las libertades fundamentales, por lo que debe ser la principal beneficiaria de los mismos. La protección de estos, es responsabilidad primordial de los gobiernos[1], pues deben, por un lado, no interferir arbitrariamente en el ejercicio de los derechos humanos de las personas o bien, de promover o tolerar cualquier práctica que los vulnere"[2], y por otro no deben llevar a cabo acciones u omisiones que los puedan poner en peligro.

El cumplimiento del "deber", y el respeto a los derechos humanos están íntimamente relacionados. Deber es tener una obligación positiva, independientemente de la naturaleza u origen de la norma que la ley que imprima este deber. Inmanuel Kant[3], explica con una visión materialista que el deber es la necesidad de una acción de respeto a la ley, con independencia a su inclinación persona o moral. La acción realizada por el deber mismo tiene que excluir por completo la inclinación personal. Y respetar los derechos humanos que el Estado Mexicano reconoce, implica abstraerse de una inclinación personal o subjetiva, toda vez que las autoridades y servidores públicos, en el ámbito de sus respectivas competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad y es interés y responsabilidad del Estado Mexicano prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos.

Por tanto la protección y defensa de los derechos humanos, representa una parte sustantiva de la Institución, por lo que hemos puesto énfasis en mejorar los procesos que aseguren al Organismo Defensor de los Derechos Humanos las capacidades institucionales para contribuir a un ejercicio pleno de los derechos por parte de los ciudadanos.

En este rubro durante el periodo del 1 de julio al 31 de diciembre de 2021, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) en sus oficinas centrales y en las Visitadurías Regionales que se ubican en Fresnillo, Jalpa, Jerez de García Salinas, Loreto, Pinos, Río Grande, Sombrerete y Tlaltenango de Sánchez Román, se aperturaron un total de 1 mil 821 expedientes de los cuales 884 fueron Asesorías, 630 Gestiones y 307 Quejas.

[1] Declaración y Programa de Acción de Viena (1993)
[2] Programa Estatal de Derechos Humanos, Titular del Poder Ejecutivo, emitido el 30 de marzo de 2015
[3] Inmanuel Kant, Fundamentación de la metafísica de las costumbres, Capítulo Segundo (Mare Nostrum Comunicación. Traducción: Manuel García Morente)

II.1. Expedientes del Segundo Semestre de 2021

En el periodo correspondiente al 1 de julio al 31 de diciembre de 2021 se informa que se iniciaron un total de 1 mil 821 expedientes como a continuación se detalla.

Expedientes Segundo Semestre de 2021

Tipo	Número
Asesorías otorgadas	884
Gestiones	307
Quejas recibidas	630
Total	1,821

Fuente: Departamento de Orientación y Quejas.
Los datos comprenden información del 1 de julio al 31 de diciembre de 2021.

II.1.1. Asesorías

En lo que respecta a las asesorías, se otorgaron servicios de orientación jurídica, administrativa y psicológica; así como asistencia en la elaboración de escritos, remisión de asuntos a otras instancias que no son de competencia de este Organismo, y realización de diversos trámites de gestiones.

II.1.1.1. Asesorías clasificadas por materia

En el periodo del 1 de julio al 31 de diciembre de 2021, las asesorías registradas fueron 884, de las cuales se registraron: 333 administrativas, 171 penitenciarias, 116 penales, 87 familiares, 75 laborales, 59 psicológicas, 21 civiles, 10 mercantiles, 11 agrarias y 1 ecológica.

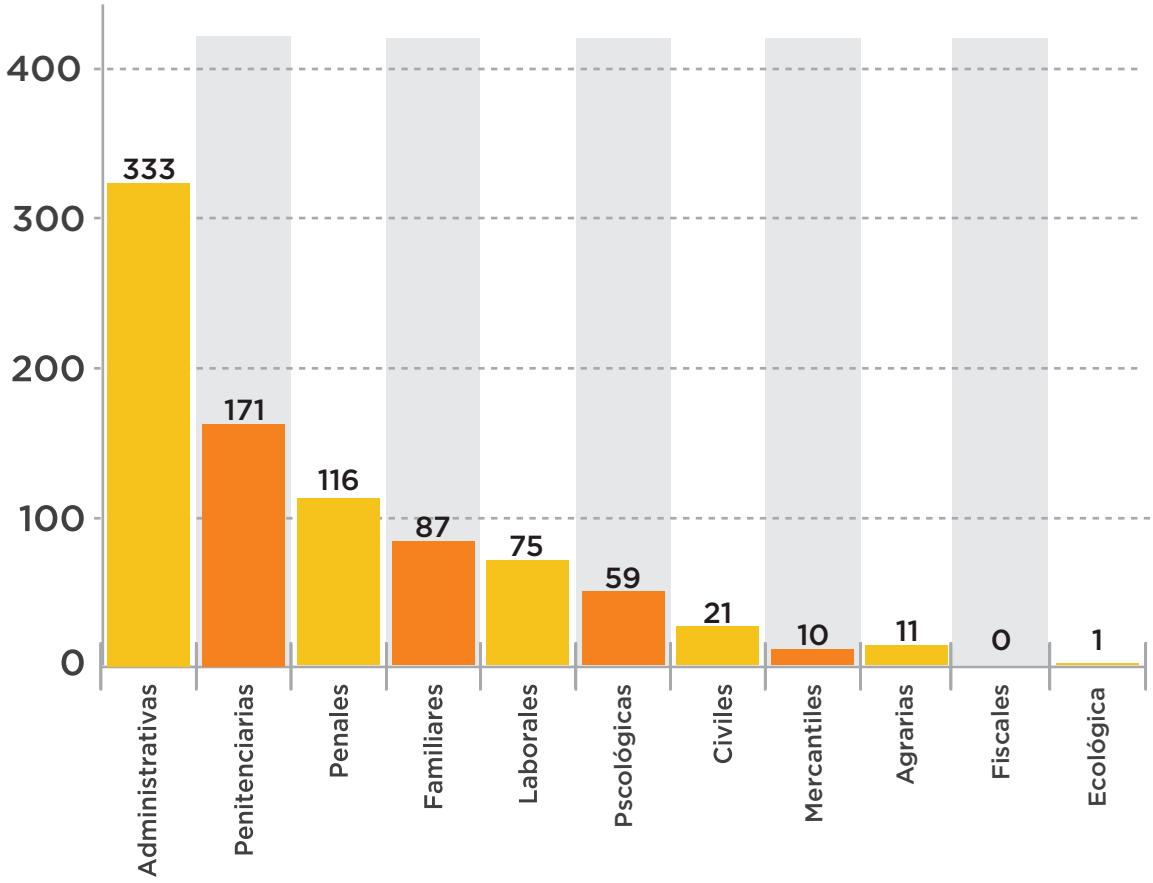
Asesorías registradas, clasificadas por Materia

Tipo	Cantidad	Porcentaje
Administrativas	333	37.67
Penitenciarias	171	19.34
Penales	116	13.12
Familiares	87	9.84
Laborales	75	8.48
Psicológicas	59	6.67
Civiles	21	2.38
Mercantiles	10	1.13
Agrarias	11	1.24
Ecológica	1	0.11
Total	884	100

Fuente: Departamento de Orientación y Quejas.
Los datos comprenden información del 1 de julio al 31 de diciembre de 2021.

Asesorías registradas clasificadas por materia

Fuente: Departamento de Orientación y Quejas.
Los datos comprenden información del 1 de julio al 31 de diciembre de 2021.



II.1.1.2. Asesorías clasificadas por materia y sexo

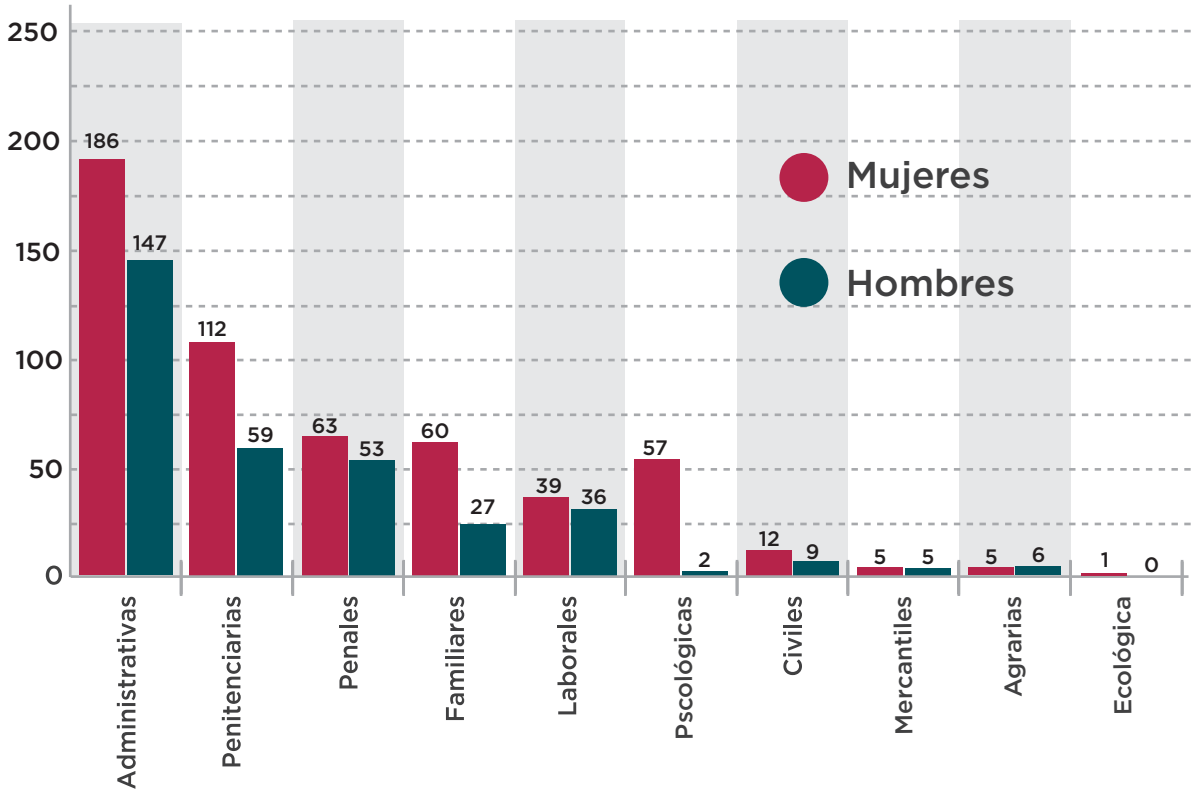
Del 1 de julio al 31 de diciembre de 2021 se registraron las siguientes asesorías: 186 interpuestas por mujeres y 147 interpuestas por hombres en materia administrativa, 112 por mujeres y 59 por hombres en materia penitenciaria, 63 por mujeres y 53 por hombres en materia penal, 60 por mujeres y 27 por hombres en materia familiar, 39 por mujeres y 36 por hombres en materia laboral, 57 por mujeres y 2 por hombres en materia psicológica, 12 por mujeres y 9 por hombres en materia civil, 5 por mujeres y 5 por hombres en materia mercantil, 5 por mujeres y 6 por hombres en materia agraria, así como 1 por mujer en materia ecológica.

Asesorías registradas, clasificadas por materia y sexo

Tipo	Mujeres	%	Hombres	%	Cantidad
Administrativas	186	34.44	147	42.73	333
Penitenciarias	112	20.74	59	17.15	171
Penales	63	11.67	53	15.41	116
Familiares	60	11.11	27	7.85	87
Laborales	39	7.22	36	10.47	75
Psicológicas	57	10.56	2	0.58	59
Civiles	12	2.22	9	2.62	21
Mercantiles	5	0.93	5	1.45	10
Agrarias	5	0.93	6	1.74	11
Ecológica	1	0.19	0	0	1
Total	540	100	344	100	884

Asesorías registradas
clasificadas por materia y sexo

Fuente: Departamento de Orientación y Quejas.
Los datos comprenden información del 1 de julio al 31 de diciembre de 2021.



II.1.1.3. Asesorías clasificadas por grupo etario

Con respecto a las asesorías registradas por grupo etario, en el periodo que se informa, 23 fueron interpuestas por personas menores de 20 años, 153 por personas del rango de edad de 21 a 30 años, 206 de la franja etaria de 31 a 40 años, 202 dentro del rango de edad de 41 a 50 años, 122 de la franja etaria de 51 a 60 años, 99 por personas en el grupo de edad de 61 a 70 años, 28 por personas dentro del rango de edad de 71 a 80 años, 7 por personas en la edad de 81 años o más y 44 por personas sin datos de edad; siendo un total de 884 personas asesoradas.

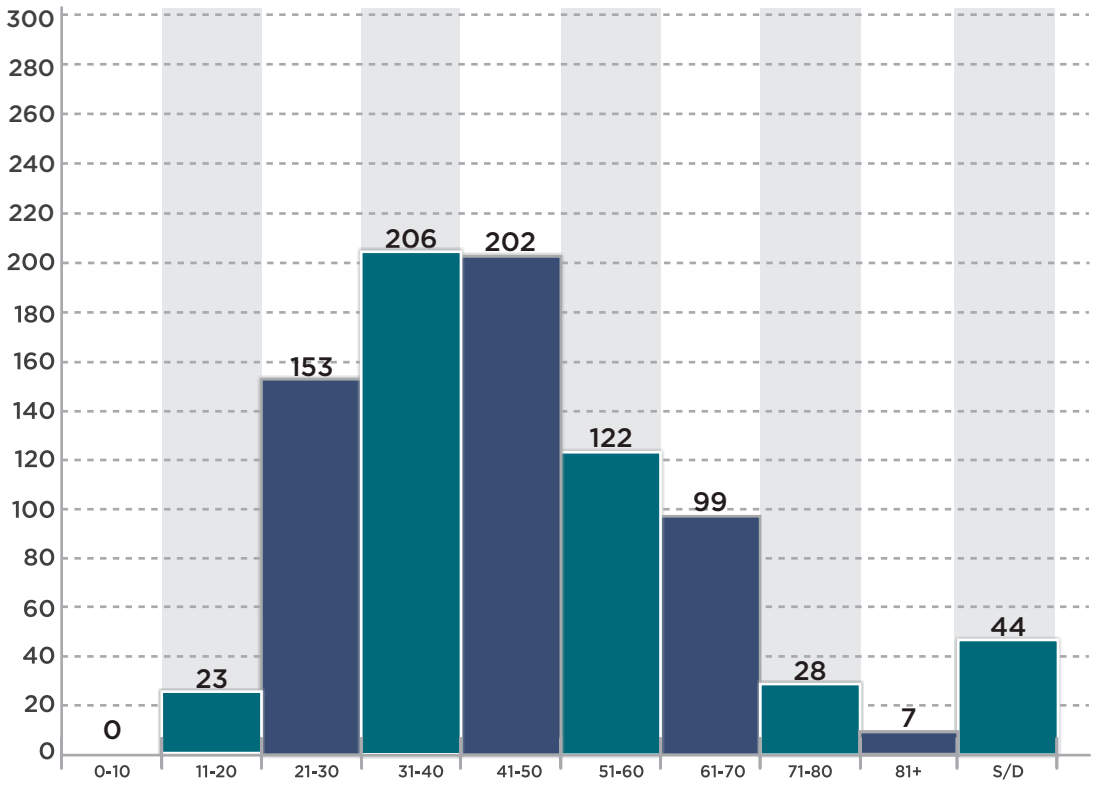
Asesorías registradas, clasificadas por grupo etario

Grupo etario	Total
0-10	0
11-20	23
21-30	153
31-40	206
41-50	202
51-60	122
61-70	99
71-80	28
81+	7
S/D	44
Total	884

Fuente: Departamento de Orientación y Quejas.
Los datos comprenden información del 1 de julio al 31 de diciembre de 2021.

Asesorías registradas clasificadas por grupos etarios

Fuente: Departamento de Orientación y Quejas.
Los datos comprenden información del 1 de julio al 31 de diciembre de 2021.



II.1.1.4. Asesorías clasificadas por grupo etario y sexo

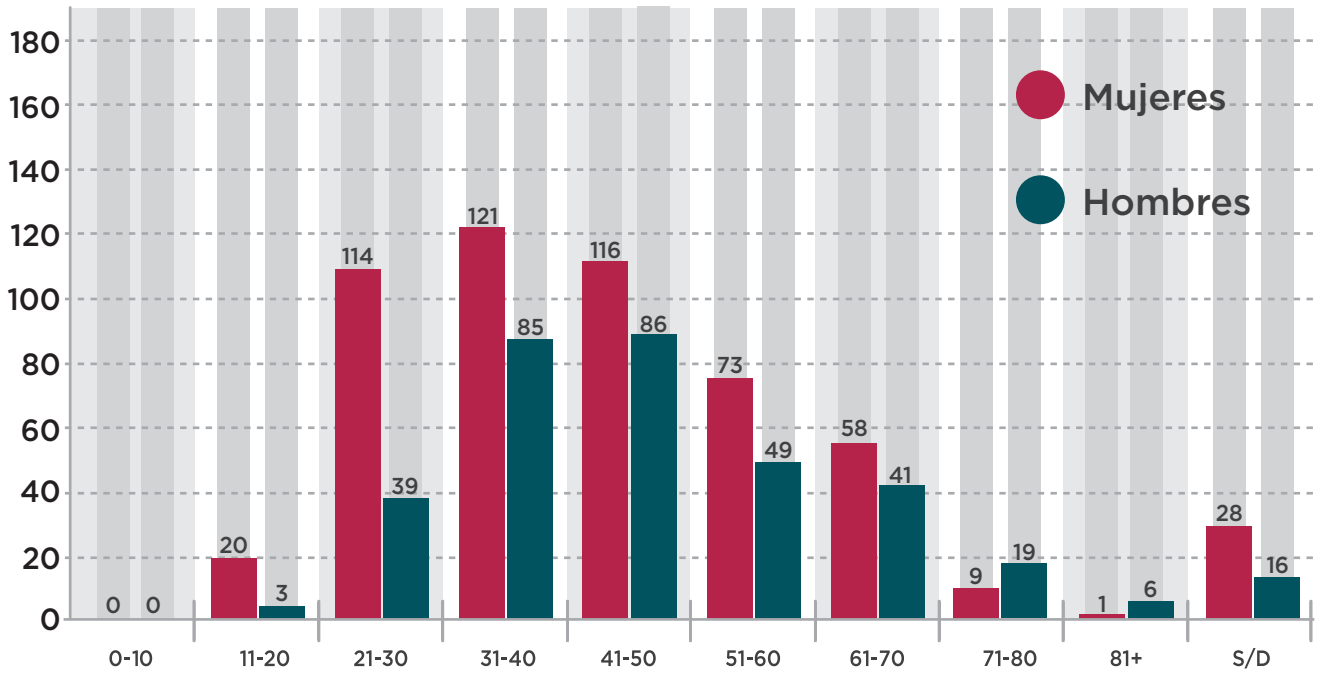
En el periodo que se informa se asesoraron a 20 mujeres y 3 hombres menores de 20 años, 114 mujeres y 39 hombres en la franja etaria de 21 a 30 años, 121 mujeres y 85 hombres en el rango de edad de 31 a 40 años, 116 mujeres y 86 hombres en la franja etaria de 41 a 50 años, 73 mujeres y 49 hombres dentro del rango de edad de 51 a 60 años, 58 mujeres y 41 hombres en la franja etaria de 61 a 70 años, 9 mujeres y 19 hombres dentro del rango de edad de 71 a 80 años, 1 mujer y 6 hombres en la franja etaria de 81 años y más, así como 28 mujeres y 16 hombres sin datos de edad; siendo un total de 540 mujeres y 344 hombres, asesorados.

Asesorías registradas, clasificadas por grupos etarios y sexo

Grupo etario	Mujeres	Hombres	Total
0-10	0	0	0
11-20	20	3	23
21-30	114	39	153
31-40	121	85	206
41-50	116	86	202
51-60	73	49	122
61-70	58	41	99
71-80	9	19	28
81 +	1	6	7
S/D	28	16	44
Total	540	344	884

Asesorías registradas
clasificadas por grupos etarios y sexo

Fuente: Departamento de Orientación y Quejas.
Los datos comprenden información del 1 de julio al 31 de diciembre de 2021.



II.1.1.5. Asesorías clasificadas por región

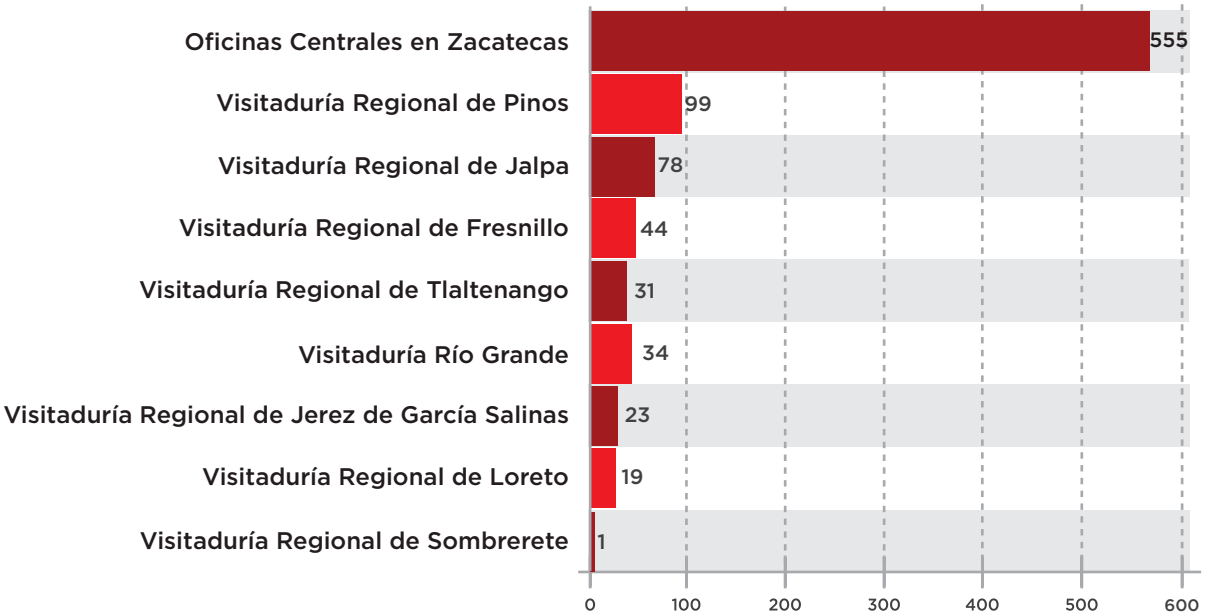
Las asesorías efectuadas por región en el periodo a informar se otorgaron de la siguiente manera: 555 en las oficinas centrales ubicadas en la capital del estado, 99 en la Visitaduría Regional de Pinos, 78 en la Visitaduría Regional de Jalpa, 44 en la Visitaduría Regional de Fresnillo, 31 en la Visitaduría Regional de Tlaltenango, 34 en la Visitaduría Regional de Río Grande, 23 en la Visitaduría Regional de Jerez de García Salinas, 19 en la Visitaduría Regional de Loreto y 1 en la Visitaduría Regional de Sombrerete.

Asesorías registradas, por región

Región	Total
Oficinas Centrales en Zacatecas	555
Visitaduría Regional de Pinos	99
Visitaduría Regional de Jalpa	78
Visitaduría Regional de Fresnillo	44
Visitaduría Regional de Tlaltenango	31
Visitaduría Regional de Río Grande	34
Visitaduría Regional de Jerez de García Salinas	23
Visitaduría Regional de Loreto	19
Visitaduría Regional de Sombrerete	1
Total	884

Asesorías registradas
por región

Fuente: Departamento de Orientación y Quejas.
Los datos comprenden información del 1 de Julio al 31 de diciembre de 2021.



II.1.1.6. Asesorías clasificadas por mes de recepción

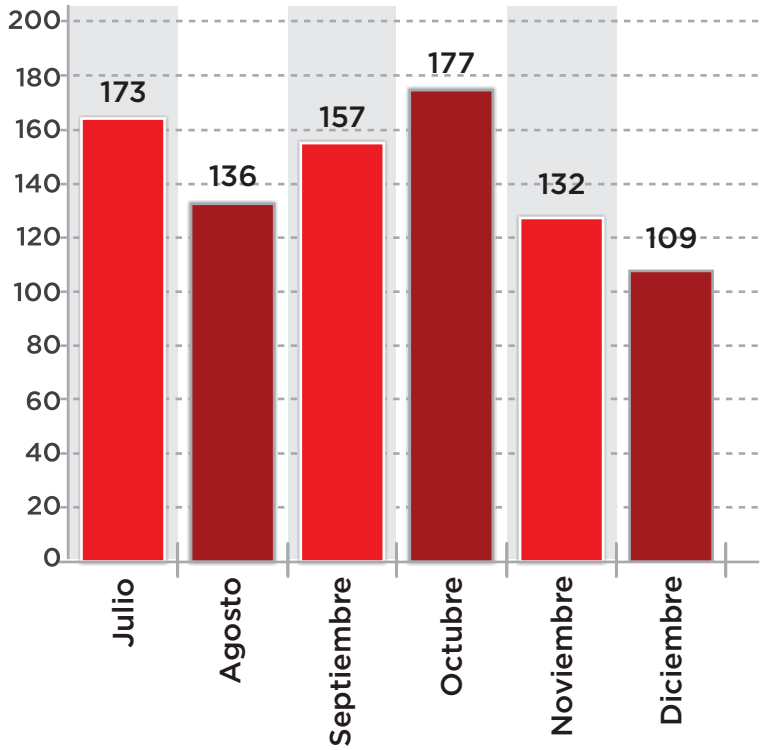
Las asesorías registradas en el periodo del 1 de julio al 31 de diciembre de 2021, de acuerdo al mes de recepción fueron: 173 en julio, 136 en agosto, 157 en septiembre, 177 en octubre, 132 en noviembre y 109 en diciembre.

Asesorías registradas, por mes de recepción

Mes	Total
Julio	173
Agosto	136
Septiembre	157
Octubre	177
Noviembre	132
Diciembre	109
Total	884

Asesorías registradas
por mes de recepción

Fuente: Departamento de Orientación y Quejas.
Los datos comprenden información del 1 de julio al 31 de diciembre de 2021.



II.1.1.7. Asesorías clasificadas por tipo de recepción

En el periodo que se informa se brindaron 884 asesorías, de las cuales 552 se recibieron de manera directa o personal, 308 telefónicas, 7 por carta o mensajería, 6 sin determinar, 2 por acta circunstanciada, 5 por prensa, 3 por internet y 1 recibidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Asesorías registradas, por tipo de recepción

Tipo de recepción	Total
Directa o personal	552
Telefónica	308
Carta o Mensajería	7
Sin Determinar	6
Acta Circunstanciada	2
Prensa	5
Internet	3
Recibidas de la CNDH	1
Total	884

Fuente: Departamento de Orientación y Quejas.
Los datos comprenden información del 1 de Julio al 31 de diciembre de 2021.

II.1.2. Gestiones

Durante el periodo del 1 de julio al 31 de diciembre de 2021 se efectuaron 449 gestiones generales en el departamento de orientación y quejas, sistema penitenciario y visitadurías regionales; así también se realizaron 181 gestiones durante la sustanciación de expedientes; siendo un total de 630 gestiones efectuadas en el ejercicio 2021.

Gestiones 2021

Gestiones Generales del Segundo Semestre del año	449
Gestiones durante la Sustanciación de Expedientes	181
Total	630

II.1.2.1 Gestiones generales

En la tabla siguiente se presentan las gestiones que se realizaron durante el segundo semestre del año 2021 por parte de este Organismo Defensor de los Derechos Humanos con número de expediente, edad, sexo e institución donde se realizó la gestión, efectuándose 449 gestiones en las visitadurías regionales, sistema penitenciario y departamento de orientación y quejas.

Gestiones Generales del 1 de julio al 31 de diciembre de 2021

No.	No. Gestión	Edad	Sexo	Autoridad
1	CDHEZ/G/ZAC/277/2021	50	Mujer	Secretaría de Educación del Estado de Zacatecas (SEDUZAC)
2	CDHEZ/G/ZAC/SP/278/2021	55	Hombre	Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Zacatecas
3	CDHEZ/G/ZAC/279/2021	37	Mujer	Distrito Judicial de Río Grande, Zacatecas
4	CDHEZ/G/ZAC/280/2021	59	Hombre	Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Zacatecas (JLCA)
5	CDHEZ/G/ZAC/281/2021	52	Mujer	Beneficencia Pública de los Servicios de Salud de Zacatecas
6	CDHEZ/G/VRR/282/2021	25	Mujer	Dirección de Seguridad Pública de Río Grande, Zacatecas
7	CDHEZ/G/VRF/283/2021	50	Mujer	Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)
8	CDHEZ/G/VRJ/284/2021	55	Mujer	Juzgado Comunitario de Huanusco, Zacatecas
9	CDHEZ/G/VRJ/285/2021	54	Hombre	Sindicatura Municipal de Jalpa, Zacatecas
10	CDHEZ/G/VRP/286/2021	55	Hombre	Servidores de la Nación en la Comunidad de la Blanca, Zacatecas
11	CDHEZ/G/ZAC/287/2021	27	Hombre	Protección Civil del municipio de Guadalupe, Zacatecas
12	CDHEZ/G/ZAC/288/2021	43	Mujer	Procuraduría de la Defensa de las Niñas, Niños, Adolescentes y Familia para el Sistema Estatal de Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF)
13	CDHEZ/G/VRR/289/2021	35	Hombre	Policía de Seguridad Vial de Río Grande, Zacatecas

No.	No. Gestión	Edad	Sexo	Autoridad
14	CDHEZ/G/VRF/290/2021	45	Mujer	Centro de Justicia para Mujeres de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ)
15	CDHEZ/G/VRF/291/2021	34	Mujer	Juzgado Comunitario de Fresnillo, Zacatecas
16	CDHEZ/G/VRF/292/2021	35	Mujer	Juzgado Comunitario de Fresnillo, Zacatecas
17	CDHEZ/G/ZAC/293/2021	32	Mujer	Hospital General de Zacatecas
18	CDHEZ/G/ZAC/294/2021	77	Mujer	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
19	CDHEZ/G/ZAC/295/2021	36	Hombre	Distrito Judicial de Sombrerete, Zacatecas
20	CDHEZ/G/ZAC/296/2021	Sin datos	Hombre	Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas
21	CDHEZ/G/ZAC/297/2021	36	Mujer	Atención Ciudadana de Gobierno del Estado de Zacatecas
22	CDHEZ/G/ZAC/298/2021	74	Hombre	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
23	CDHEZ/G/ZAC/299/2021	65	Hombre	Instituto de la Defensoría Pública Federal
24	CDHEZ/G/ZAC/300/2021	37	Hombre	Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas (TSJEZ)
25	CDHEZ/G/ZAC/SP/301/2021	20	Mujer	Centro de Internamiento y Atención Integral Juvenil del Estado de Zacatecas (CIAIJZ)
26	CDHEZ/G/ZAC/SP/302/2021	19	Mujer	Centro de Internamiento y Atención Integral Juvenil del Estado de Zacatecas (CIAIJZ)
27	CDHEZ/G/ZAC/SP/303/2021	18	Mujer	Centro de Internamiento y Atención Integral Juvenil del Estado de Zacatecas (CIAIJZ)
28	CDHEZ/G/ZAC/SP/304/2021	18	Mujer	Centro de Internamiento y Atención Integral Juvenil del Estado de Zacatecas (CIAIJZ)
29	CDHEZ/G/ZAC/305/2021	68	Hombre	Dirección General de Transporte de Gobierno del Estado de Zacatecas
30	CDHEZ/G/ZAC/306/2021	31	Hombre	Centro Regional de Reinserción Social Varonil Cieneguillas
31	CDHEZ/G/VRR/307/2021	69	Mujer	Distrito Judicial de Miguel Auza, Zacatecas
32	CDHEZ/G/ZAC/308/2021	Sin datos	Mujer	Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ)
33	CDHEZ/G/ZAC/309/2021	Sin datos	Mujer	Beneficencia Pública y Atención ciudadana de Gobierno del Estado de Zacatecas
34	CDHEZ/G/ZAC/310/2021	33	Mujer	Hospital General de Zacatecas
35	CDHEZ/G/ZAC/311/2021	Sin datos	Mujer	Instituto Nacional de Migración (INM)
36	CDHEZ/G/ZAC/SP/312/2021	48	Mujer	Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua
37	CDHEZ/G/ZAC/SP/313/2021	46	Mujer	Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Zacatecas
38	CDHEZ/G/ZAC/314/2021	52	Mujer	Módulo de Atención Temprana de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ)
39	CDHEZ/G/VRP/315/2021	58	Mujer	Registro Civil de Pinos, Zacatecas
40	CDHEZ/G/VRF/316/2021	67	Mujer	Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)

No.	No. Gestión	Edad	Sexo	Autoridad
41	CDHEZ/G/VRF/317/2021	50	Hombre	Juzgado Comunitario del H. Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas
42	CDHEZ/G/VRF/318/2021	47	Mujer	Presidencia Municipal de Fresnillo, Zacatecas
43	CDHEZ/G/VRF/319/2021	51	Mujer	Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ)
44	CDHEZ/G/VRF/320/2021	41	Mujer	Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Zacatecas (CEAVS)
45	CDHEZ/G/VRF/321/2021	33	Hombre	Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo
46	CDHEZ/G/VRP/322/2021	55	Hombre	Ministerio Público en Pinos, Zacatecas
47	CDHEZ/G/VRP/323/2021	27	Mujer	Sistema Municipal de Desarrollo Integral para la Familia de Pinos, Zacatecas
48	CDHEZ/G/ZAC/324/2021	55	Mujer	Procuraduría de la Defensa del Trabajador
49	CDHEZ/G/ZAC/325/2021	Sin datos	Mujer	Instituto Nacional de Migración (INM)
50	CDHEZ/G/ZAC/326/2021	41	Hombre	Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ)
51	CDHEZ/G/ZAC/327/2021	74	Hombre	Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)
52	CDHEZ/G/ZAC/328/2021	47	Hombre	Centro de Justicia para Mujeres y Juzgado III de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas (TSJEZ)
53	CDHEZ/G/ZAC/329/2021	30	Mujer	Procuraduría de la Defensa de las Niñas, Niños, Adolescentes y Familia para el Sistema Estatal de Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF)
54	CDHEZ/G/ZAC/330/202	31	Mujer	Procuraduría de la Defensa de las Niñas, Niños, Adolescentes y Familia para el Sistema Estatal de Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF)
55	CDHEZ/G/VRR/331/2021	35	Hombre	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
56	CDHEZ/G/VRR/332/2021	54	Hombre	Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Zacatecas (JLCA)
57	CDHEZ/G/VRP/333/2021	26	Hombre	Dirección de Seguridad Pública del Municipio de Pinos, Zacatecas
58	CDHEZ/G/VRP/334/2021	69	Mujer	Presidencia Municipal de Pinos, Zacatecas
59	CDHEZ/G/ZAC/335/2021	23	Hombre	Centro de Internamiento y Atención Integral Juvenil del Estado de Zacatecas (CIAIJZ)
60	CDHEZ/G/ZAC/336/2021	40	Hombre	Embajada Española
61	CDHEZ/G/ZAC/337/2021	64	Mujer	Módulo de Atención Temprana de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ)
62	CDHEZ/G/ZAC/338/2021	49	Mujer	Juzgado Comunitario de Guadalupe, Zacatecas
63	CDHEZ/G/VRP/339/2021	58	Hombre	Agencia del Ministerio Público de Pinos, Zacatecas
64	CDHEZ/G/VRP/340/2021	65	Hombre	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
65	CDHEZ/G/VRJ/341/2021	49	Hombre	Presidencia Municipal de Jalpa, Zacatecas

No.	No. Gestión	Edad	Sexo	Autoridad
66	CDHEZ/G/VRJ/342/2021	35	Mujer	Delegación de Tránsito en Jalpa, Zacatecas
67	CDHEZ/G/VRJ/343/2021	69	Mujer	Presidencia Municipal de Huanusco, Zacatecas
68	CDHEZ/G/ZAC/344/2021	53	Mujer	Unidad de Investigación de Calera, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ)
69	CDHEZ/G/ZAC/345/2021	60	Mujer	Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia
70	CDHEZ/G/ZAC/SP/346/2021	24	Mujer	Instituto de la Defensoría Pública Federal
71	CDHEZ/G/ZAC/SP/347/2021	56	Mujer	Centro Regional de Reinserción Social Varonil Cieneguillas
72	CDHEZ/G/ZAC/SP/348/2021	33	Mujer	Centro Regional de Reinserción Social Varonil Cieneguillas
73	CDHEZ/G/ZAC/349/2021	35	Mujer	Dirección de Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ)
74	CDHEZ/G/ZAC/350/2021	42	Hombre	Instituto de la Defensoría Pública Estatal
75	CDHEZ/G/ZAC/351/2021	51	Mujer	Procuraduría de la Defensa de las Niñas, Niños, Adolescentes y Familia para el Sistema Estatal de Desarrollo Integral de la Familia
76	CDHEZ/G/ZAC/352/2021	81	Hombre	Presidencia Municipal de Zacatecas, Zacatecas
77	CDHEZ/G/ZAC/353/2021	38	Mujer	Módulo de Atención Temprana
78	CDHEZ/G/ZAC/354/2021	20	Hombre	Coordinación de Aprehensiones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ)
79	CDHEZ/G/ZAC/355/2021	50	Hombre	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
80	CDHEZ/G/ZAC/356/2021	87	Hombre	Módulo de Atención Temprana de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ)
81	CDHEZ/G/ZAC/357/2021	63	Hombre	Procuraduría de la Defensa de las Niñas, Niños, Adolescentes y Familia para el Sistema Estatal de Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF)
82	CDHEZ/G/ZAC/358/2021	33	Mujer	Centro de Justicia para Mujeres de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ)
83	CDHEZ/G/ZAC/359/2021	46	Mujer	Fiscalía Especializada para la Atención de Desaparición Forzada y Cometida por Particulares, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ)
84	CDHEZ/G/ZAC/360/2021	20	Mujer	Centro de Justicia para Mujeres de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ)
85	CDHEZ/G/ZAC/SP/361/2021	Sin datos	Hombre	Centro Estatal de Reinserción Social Femenil Cieneguillas
86	CDHEZ/G/ZAC/SP/362/2021	Sin datos	Hombre	Centro Estatal de Reinserción Social Femenil Cieneguillas
87	CDHEZ/G/ZAC/SP/363/2021	19	Mujer	Centro Estatal de Reinserción Social Femenil Cieneguillas
88	CDHEZ/G/ZAC/364/2021	32	Mujer	Procuraduría de Protección a Niñas, Niños, Adolescentes y Familia; así como Juzgado Cuarto del Ramo Familiar
89	CDHEZ/G/VRF/365/2021	43	Mujer	Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Fresnillo, Zacatecas
90	CDHEZ/G/VRF/366/2021	67	Mujer	Ministerio público adscrita a la Unidad Especializada en Delitos en Materia de Género en el Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas

No.	No. Gestión	Edad	Sexo	Autoridad
91	CDHEZ/G/VRF/357/2021	38	Hombre	Módulo de Atención Temprana de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ)
92	CDHEZ/G/VRF/368/2021	43	Mujer	Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia
93	CDHEZ/G/VRR/369/2021	48	Mujer	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Clínica de Bienestar en Río Grande, Zacatecas
94	CDHEZ/G/VRJ/370/2021	28	Mujer	Secretario de Gobierno del H. Ayuntamiento de Jerez, Zacatecas, así como Radio Jerez
95	CDHEZ/G/ZAC/371/2021	40	Hombre	Área de Pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
96	CDHEZ/G/ZAC/372/2021	56	Hombre	Hospital de Especialidades en Salud Mental (CISAME), en Calera de Víctor Rosales, Zacatecas
97	CDHEZ/G/ZAC/373/2021	26	Mujer	Fiscalía del Ministerio Público de la Unidad Mixta del Distrito Judicial de Sombrerete, Zacatecas
98	CDHEZ/G/ZAC/374/2021	48	Mujer	Dirección de Recursos Humanos de la Presidencia Municipal de Villanueva, Zacatecas
99	CDHEZ/G/ZAC/375/2021	45	Mujer	Dirección de Recursos Humanos de la Presidencia Municipal de Villanueva, Zacatecas
100	CDHEZ/G/ZAC/SP/376/2021	32	Mujer	Centro Estatal de Reinserción Social Femenil Cieneguillas
101	CDHEZ/G/ZAC/SP/377/2021	40	Mujer	Centro Estatal de Reinserción Social Femenil Cieneguillas
102	CDHEZ/G/ZAC/SP/378/2021	Sin datos	Mujer	Centro Estatal de Reinserción Social Femenil Cieneguillas
103	CDHEZ/G/ZAC/SP/379/2021	62	Mujer	Agencia del Ministerio Público Especializada en Tortura
104	CDHEZ/G/ZAC/SP/380/2021	25	Mujer	Centro Estatal de Reinserción Social Femenil Cieneguillas
105	CDHEZ/G/ZAC/SP/381/2021	37	Mujer	Centro Estatal de Reinserción Social Femenil Cieneguillas
106	CDHEZ/G/ZAC/382/2021	73	Hombre	Oficina de Pensiones de Adultos Mayores de la Secretaría del Bienestar
107	CDHEZ/G/ZAC/SP/383/2021	39	Hombre	Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Zacatecas y Establecimiento Penitenciario Distrital de Tlaltenango, Zacatecas
108	CDHEZ/G/ZAC/384/2021	60	Hombre	Módulo de Atención Temprana de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ)
109	CDHEZ/G/ZAC/385/2021	38	Hombre	Juzgado del Ramo Civil
110	CDHEZ/G/ZAC/386/2021	39	Mujer	Procuraduría de la Defensa de las Niñas, Niños, Adolescentes y Familia para el Sistema Estatal de Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF)
111	CDHEZ/G/ZAC/387/2021	69	Hombre	Ministerio Público adscrita a la Agencia Mixta de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ)
112	CDHEZ/G/ZAC/388/2021	41	Mujer	Bachillerato Policial
113	CDHEZ/G/ZAC/389/2021	56	Mujer	Instituto Zacatecano de Ciencias Forenses
114	CDHEZ/G/ZAC/390/2021	45	Mujer	Instituto Zacatecano de Ciencias Forenses
115	CDHEZ/G/ZAC/391/2021	36	Mujer	Centro Regional de Reinserción Social Varonil Cieneguillas
116	CDHEZ/G/ZAC/SP/392/2021	73	Hombre	Establecimiento Penitenciario Distrital de Pinos, Zacatecas

No.	No. Gestión	Edad	Sexo	Autoridad
117	CDHEZ/G/ZAC/SP/393/2021	19	Mujer	Centro Regional de Reinserción Social Varonil Cieneguillas
118	CDUEZ/G/ZAC/SP/394/2021	39	Mujer	Centro Regional de Reinserción Social Varonil Cieneguillas
119	CDHEZ/G/CRF/395/2021	39	Hombre	Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo
120	CDHEZ/G/ZAC/396/2021	70	Hombre	Secretaría del Bienestar del Estado de Zacatecas
121	CDHEZ/G/ZAC/397/2021	41	Hombre	Contraloría Social de la Presidencia Municipal de Zacatecas
122	CDHEZ/G/ZAC/398/2021	38	Hombre	Procuraduría de la Defensa de las Niñas, Niños, Adolescentes y Familia para el Sistema Estatal de Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF)
123	CDHEZ/G/ZAC/399/2021	47	Hombre	Cruz Roja Mexicana
124	CDHEZ/G/ZAC/400/2021	45	Hombre	Cruz Roja Mexicana
125	CDHEZ/G/ZAC/401/2021	44	Mujer	Cruz Roja Mexicana
126	CDHEZ/G/ZAC/402/2021	17	Hombre	Cruz Roja Mexicana
127	CDHEZ/G/ZAC/403/2021	11	Mujer	Cruz Roja Mexicana
128	CDHEZ/G/ZAC/404/2021	13	Hombre	Cruz Roja Mexicana
129	CDHEZ/G/ZAC/405/2021	32	Hombre	Cruz Roja Mexicana
130	CDHEZ/G/ZAC/406/2021	34	Mujer	Cruz Roja Mexicana
131	CDHEZ/G/ZAC/407/2021	7	Mujer	Cruz Roja Mexicana
132	CDHEZ/G/ZAC/408/2021	3	Hombre	Cruz Roja Mexicana
133	CDHEZ/G/ZAC/409/2021	37	Hombre	Cruz Roja Mexicana
134	CDHEZ/G/ZAC/410/2021	35	Mujer	Cruz Roja Mexicana
135	CDHEZ/G/ZAC/411/2021	29	Mujer	Cruz Roja Mexicana
136	CDHEZ/G/ZAC/412/2021	42	Hombre	Cruz Roja Mexicana
137	CDHEZ/G/ZAC/413/2021	35	Mujer	Cruz Roja Mexicana
138	CDHEZ/G/ZAC/414/2021	4	Hombre	Cruz Roja Mexicana
139	CDHEZ/G/ZAC/415/2021	22	Hombre	Instituto Nacional de Migración (INM)
140	CDHEZ/G/ZAC/416/2021	25	Hombre	Instituto Nacional de Migración (INM)
141	CDHEZ/G/ZAC/417/2021	28	Hombre	Instituto Nacional de Migración (INM)
142	CDHEZ/G/ZAC/418/2021	34	Hombre	Instituto Nacional de Migración (INM)
143	CDHEZ/G/ZAC/419/2021	22	Hombre	Instituto Nacional de Migración (INM)

No.	No. Gestión	Edad	Sexo	Autoridad
144	CDHEZ/G/ZAC/420/2021	18	Hombre	Instituto Nacional de Migración (INM)
145	CDHEZ/G/ZAC/421/2021	33	Hombre	Instituto Nacional de Migración (INM)
146	CDHEZ/G/ZAC/422/2021	19	Hombre	Instituto Nacional de Migración (INM)
147	CDHEZ/G/ZAC/423/2021	25	Hombre	Instituto Nacional de Migración (INM)
148	CDHEZ/G/ZAC/424/2021	25	Hombre	Instituto Nacional de Migración (INM)
149	CDHEZ/G/ZAC/425/2021	28	Hombre	Instituto Nacional de Migración (INM)
150	CDHEZ/G/ZAC/426/2021	27	Hombre	Instituto Nacional de Migración (INM)
151	CDHEZ/G/ZAC/427/2021	45	Hombre	Instituto Nacional de Migración (INM)
152	CDHEZ/G/ZAC/428/2021	21	Hombre	Instituto Nacional de Migración (INM)
153	CDHEZ/G/ZAC/429/2021	33	Hombre	Instituto Nacional de Migración (INM)
154	CDHEZ/G/ZAC/430/2021	22	Hombre	Instituto Nacional de Migración (INM)
155	CDHEZ/G/ZAC/431/2021	34	Hombre	Instituto Nacional de Migración (INM)
156	CDHEZ/G/ZAC/432/2021	19	Hombre	Instituto Nacional de Migración (INM)
157	CDHEZ/G/ZAC/433/2021	31	Hombre	Instituto Nacional de Migración (INM)
158	CDHEZ/G/ZAC/434/2021	25	Hombre	Instituto Nacional de Migración (INM)
159	CDHEZ/G/ZAC/435/2021	27	Hombre	Instituto Nacional de Migración (INM)
160	CDHEZ/G/ZAC/436/2021	25	Hombre	Instituto Nacional de Migración (INM)
161	CDHEZ/G/ZAC/437/2021	24	Hombre	Instituto Nacional de Migración (INM)
162	CDHEZ/G/ZAC/438/2021	36	Hombre	Instituto Nacional de Migración (INM)
163	CDHEZ/G/ZAC/439/2021	24	Hombre	Instituto Nacional de Migración (INM)
164	CDHEZ/G/ZAC/440/2021	22	Hombre	Instituto Nacional de Migración (INM)
165	CDHEZ/G/ZAC/441/2021	26	Hombre	Instituto Nacional de Migración (INM)
166	CDHEZ/G/ZAC/442/2021	30	Hombre	Instituto Nacional de Migración (INM)
167	CDHEZ/G/ZAC/443/2021	33	Hombre	Instituto Nacional de Migración (INM)
168	CDHEZ/G/ZAC/444/2021	28	Hombre	Instituto Nacional de Migración (INM)
169	CDHEZ/G/ZAC/445/2021	24	Hombre	Instituto Nacional de Migración (INM)
170	CDHEZ/G/ZAC/446/2021	20	Mujer	Instituto Nacional de Migración (INM)

No.	No. Gestión	Edad	Sexo	Autoridad
171	CDHEZ/G/ZAC/447/2021	25	Hombre	Instituto Nacional de Migración (INM)
172	CDHEZ/G/ZAC/448/2021	26	Hombre	Instituto Nacional de Migración (INM)
173	CDHEZ/G/ZAC/449/2021	22	Hombre	Instituto Nacional de Migración (INM)
174	CDHEZ/G/ZAC/450/2021	27	Hombre	Instituto Nacional de Migración (INM)
175	CDHEZ/G/ZAC/451/2021	25	Hombre	Instituto Nacional de Migración (INM)
176	CDHEZ/G/ZAC/452/2021	31	Hombre	Instituto Nacional de Migración (INM)
177	CDHEZ/G/ZAC/453/2021	26	Hombre	Instituto Nacional de Migración (INM)
178	CDHEZ/G/ZAC/454/2021	21	Hombre	Instituto Nacional de Migración (INM)
179	CDHEZ/G/ZAC/455/2021	24	Hombre	Instituto Nacional de Migración (INM)
180	CDHEZ/G/ZAC/456/2021	28	Hombre	Instituto Nacional de Migración (INM)
181	CDHEZ/G/ZAC/457/2021	24	Mujer	Instituto Nacional de Migración (INM)
182	CDHEZ/G/ZAC/458/2021	29	Hombre	Instituto Nacional de Migración (INM)
183	CDHEZ/G/ZAC/459/2021	24	Hombre	Instituto Nacional de Migración (INM)
184	CDHEZ/G/ZAC/460/2021	22	Hombre	Instituto Nacional de Migración (INM)
185	CDHEZ/G/ZAC/461/2021	31	Hombre	Instituto Nacional de Migración (INM)
186	CDHEZ/G/ZAC/462/2021	36	Hombre	Instituto Nacional de Migración (INM)
187	CDHEZ/G/ZAC/463/2021	24	Hombre	Instituto Nacional de Migración (INM)
188	CDHEZ/G/ZAC/464/2021	19	Hombre	Instituto Nacional de Migración (INM)
189	CDHEZ/G/ZAC/465/2021	22	Hombre	Instituto Nacional de Migración (INM)
190	CDHEZ/G/ZAC/466/2021	30	Mujer	Instituto Nacional de Migración (INM)
191	CDHEZ/G/ZAC/467/2021	24	Hombre	Instituto Nacional de Migración (INM)
192	CDHEZ/G/ZAC/468/2021	30	Hombre	Instituto Nacional de Migración (INM)
193	CDHEZ/G/ZAC/469/2021	21	Mujer	Instituto Nacional de Migración (INM)
194	CDHEZ/G/ZAC/470/2021	24	Hombre	Instituto Nacional de Migración (INM)
195	CDHEZ/G/ZAC/471/2021	23	Hombre	Instituto Nacional de Migración (INM)
196	CDHEZ/G/ZAC/472/2021	21	Hombre	Instituto Nacional de Migración (INM)
197	CDHEZ/G/ZAC/473/2021	26	Hombre	Instituto Nacional de Migración (INM)

No.	No. Gestión	Edad	Sexo	Autoridad
198	CDHEZ/G/ZAC/474/2021	26	Hombre	Instituto Nacional de Migración (INM)
199	CDHEZ/G/ZAC/475/2021	35	Hombre	Instituto Nacional de Migración (INM)
200	CDHEZ/G/ZAC/476/2021	31	Hombre	Instituto Nacional de Migración (INM)
201	CDHEZ/G/ZAC/477/2021	28	Hombre	Instituto Nacional de Migración (INM)
202	CDHEZ/G/ZAC/478/2021	40	Hombre	Instituto Nacional de Migración (INM)
203	CDHEZ/G/ZAC/478/2021	24	Hombre	Instituto Nacional de Migración (INM)
204	CDHEZ/G/ZAC/480/2021	26	Hombre	Instituto Nacional de Migración (INM)
205	CDHEZ/G/ZAC/481/2021	28	Hombre	Instituto Nacional de Migración (INM)
206	CDHEZ/G/ZAC/482/2021	28	Hombre	Instituto Nacional de Migración (INM)
207	CDHEZ/G/ZAC/483/2021	25	Hombre	Instituto Nacional de Migración (INM)
208	CDHEZ/G/ZAC/484/2021	30	Hombre	Instituto Nacional de Migración (INM)
209	CDHEZ/G/ZAC/485/2021	19	Mujer	Fiscalía del Ministerio Público Adscrita a la Unidad Especializada en Delitos contra el Orden, la Familia y la Libertad
210	CDHEZ/G/ZAC/486/2021	30	Hombre	Oficina de Atención al Derecho Habiente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
211	CDHEZ/G/ZAC/487/2021	41	Hombre	Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Zacatecas
212	CDHEZ/G/ZAC/488/2021	47	Hombre	Departamento de atención Temprana de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ)
213	CDHEZ/G/ZAC/489/2021	30	Mujer	Clínica No. 8 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
214	CDHEZ/G/VRF/490/2021	48	Hombre	Instituto de Defensoría Pública del Estado de Zacatecas
215	CDHEZ/G/VRF/491/2021	Sin datos	Mujer	Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Género, en el Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas
216	CDHEZ/G/VRR/492/2021	42	Hombre	Distrito Judicial de Miguel Auza, Zacatecas
217	CDHEZ/G/VRR/493/2021	40	Mujer	Registro Civil de Fresnillo, Zacatecas
218	CDHEZ/G/VRP/494/2021	35	Hombre	Establecimiento Penitenciario Distrital de Pinos, Zacatecas
219	CDHEZ/G/VRP/495/2021	70	Mujer	Dirección del Registro Civil en la Presidencia de Pinos, Zacatecas
220	CDHEZ/G/ZAC/496/2021	39	Hombre	Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Zacatecas
221	CDHEZ/G/ZAC/497/2021	30	Hombre	Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Género, en el Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas
222	CDHEZ/G/ZAC/498/2021	49	Hombre	Distrito Judicial de Miguel Auza, Zacatecas
223	CDHEZ/G/ZAC/499/2021	64	Hombre	Registro Civil de Fresnillo, Zacatecas
224	CDHEZ/G/ZAC/500/2021	63	Mujer	Medidas Cautelares del Establecimiento Penitenciario Distrital de Pinos, Zacatecas

No.	No. Gestión	Edad	Sexo	Autoridad
225	CDHEZ/G/ZAC/SP/501/2021	55	Mujer	Dirección del Registro Civil en Pinos, Zacatecas
226	CDHEZ/G/ZAC/SP/502/2021	46	Mujer	Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Zacatecas
227	CDHEZ/G/ZAC/SP/503/2021	31	Mujer	Dirección de Policía de Seguridad Vial de Zacatecas
228	CDHEZ/G/ZAC/504/2021	49	Mujer	Área de Atención al Derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social Delegación Zacatecas
229	CDHEZ/G/ZAC/505/2021	51	Mujer	Dirección de Operaciones a Clientes de la zona norte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Fresnillo, Zacatecas
230	CDHEZ/G/ZAC/506/2021	60	Hombre	Procuraduría de Protección de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia
231	CDHEZ/G/ZAC/507/2021	51	Mujer	Centro Estatal de Reinserción Social Femenil Cieneguillas
232	CDHEZ/G/ZAC/508/2021	51	Hombre	Centro Estatal de Reinserción Social Femenil Cieneguillas
233	CDHEZ/G/ZAC/509/2021	33	Mujer	Centro Regional de Reinserción Social Varonil Cieneguillas
234	CDHEZ/G/ZAC/510/2021	54	Mujer	Juzgado Familiar de Zacatecas, Zacatecas
235	CDHEZ/G/ZAC/511/2021	23	Hombre	Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Delito Relacionados con Hechos de Corrupción
236	CDHEZ/G/ZAC/512/2021	23	Hombre	Hospital Comunitario de Sombrerete, Zacatecas
237	CDHEZ/G/ZAC/513/2021	25	Hombre	Departamento de Atención al Derecho Habiente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
238	CDHEZ/G/ZAC/514/2021	27	Hombre	Registro Civil No. 2 de Guadalupe, Zacatecas
239	CDHEZ/G/ZAC/515/2021	29	Hombre	Hospital General de Zacatecas
240	CDHEZ/G/ZAC/516/2021	34	Hombre	Casa Hogar para jóvenes del Sistema Estatal de Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF)
241	CDHEZ/G/ZAC/517/2021	18	Hombre	Instituto Nacional de Migración (INM)
242	CDHEZ/G/ZAC/518/2021	26	Hombre	Instituto Nacional de Migración (INM)
243	CDHEZ/G/ZAC/519/2021	36	Hombre	Instituto Nacional de Migración (INM)
244	CDHEZ/G/ZAC/520/2021	28	Hombre	Instituto Nacional de Migración (INM)
245	CDHEZ/G/ZAC/521/2021	23	Hombre	Instituto Nacional de Migración (INM)
246	CDHEZ/G/ZAC/522/2021	28	Hombre	Instituto Nacional de Migración (INM)
247	CDHEZ/G/ZAC/523/2021	28	Hombre	Instituto Nacional de Migración (INM)
248	CDHEZ/G/ZAC/524/2021	23	Hombre	Instituto Nacional de Migración (INM)
249	CDHEZ/G/ZAC/525/2021	20	Hombre	Instituto Nacional de Migración (INM)
250	CDHEZ/G/ZAC/526/2021	30	Hombre	Instituto Nacional de Migración (INM)
251	CDHEZ/G/ZAC/527/2021	25	Hombre	Instituto Nacional de Migración (INM)

No.	No. Gestión	Edad	Sexo	Autoridad
252	CDHEZ/G/ZAC/528/2021	25	Mujer	Instituto Nacional de Migración (INM)
253	CDHEZ/G/ZAC/529/2021	22	Mujer	Instituto Nacional de Migración (INM)
254	CDHEZ/G/ZAC/530/2021	33	Mujer	Instituto Nacional de Migración (INM)
255	CDHEZ/G/ZAC/531/2021	25	Mujer	Instituto Nacional de Migración (INM)
256	CDHEZ/G/VRP/532/2021	67	Mujer	Instituto Nacional de Migración (INM)
257	CDHEZ/G/ZAC/533/2021	59	Hombre	Instituto Nacional de Migración (INM)
258	CDHEZ/G/ZAC/534/2021	33	Hombre	Instituto Nacional de Migración (INM)
259	CDHEZ/G/ZAC/535/2021	48	Hombre	Instituto Nacional de Migración (INM)
260	CDHEZ/G/ZAC/536/2021	39	Mujer	Instituto Nacional de Migración (INM)
261	CDHEZ/G/ZAC/537/2021	74	Hombre	Instituto Nacional de Migración (INM)
262	CDHEZ/G/ZAC/538/2021	63	Mujer	Servidores de la Nación
263	CDHEZ/G/ZAC/539/2021	33	Mujer	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)
264	CDHEZ/G/ZAC/SP/540/2021	55	Mujer	Juzgado Cuarto Familiar
265	CDHEZ/G/ZAC/541/2021	30	Mujer	Centro Regional de Reinserción Social Varonil Cieneguillas
266	CDHEZ/G/ZAC/542/2021	Sin datos	Mujer	Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Huanusco, Zacatecas
267	CDHEZ/G/ZAC/543/2021	23	Mujer	Procuraduría Agraria
268	CDHEZ/G/ZAC/544/2021	70	Hombre	Instituto Nacional del Suelo Sustentable
269	CDHEZ/G/ZAC/545/2021	28	Hombre	Área Jurídica del Hospital General de Zacatecas
270	CDHEZ/G/VRR/546/2021	48	Hombre	Centro Regional de Reinserción Social Varonil Cieneguillas
271	CDHEZ/G/VRR/547/2021	45	Mujer	Centro de Justicia para Mujeres de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ)
272	CDHEZ/G/ZAC/548/2021	23	Hombre	Instituto Nacional de Migración (INM)
273	CDHEZ/G/ZAC/549/2021	25	Hombre	Instituto Nacional de Migración (INM)
274	CDHEZ/G/ZAC/550/2021	27	Hombre	Instituto Nacional de Migración (INM)
275	CDHEZ/G/ZAC/551/2021	29	Hombre	Instituto Nacional de Migración (INM)
276	CDHEZ/G/ZAC/552/2021	34	Hombre	Instituto Nacional de Migración (INM)
277	CDHEZ/G/ZAC/553/2021	18	Hombre	Instituto Nacional de Migración (INM)
278	CDHEZ/G/ZAC/554/2021	26	Hombre	Instituto Nacional de Migración (INM)

No.	No. Gestión	Edad	Sexo	Autoridad
279	CDHEZ/G/ZAC/555/2021	36	Hombre	Instituto Nacional de Migración (INM)
280	CDHEZ/G/ZAC/556/2021	28	Hombre	Instituto Nacional de Migración (INM)
281	CDHEZ/G/ZAC/557/2021	23	Hombre	Instituto Nacional de Migración (INM)
282	CDHEZ/G/ZAC/558/2021	28	Hombre	Instituto Nacional de Migración (INM)
283	CDHEZ/G/ZAC/559/2021	28	Hombre	Instituto Nacional de Migración (INM)
284	CDHEZ/G/ZAC/560/2021	23	Hombre	Instituto Nacional de Migración (INM)
285	CDHEZ/G/ZAC/561/2021	20	Hombre	Instituto Nacional de Migración (INM)
286	CDHEZ/G/ZAC/562/2021	30	Hombre	Instituto Nacional de Migración (INM)
287	CDHEZ/G/ZAC/563/2021	25	Hombre	Instituto Nacional de Migración (INM)
288	CDHEZ/G/ZAC/564/2021	22	Hombre	Instituto Nacional de Migración (INM)
289	CDHEZ/G/ZAC/565/2021	30	Hombre	Instituto Nacional de Migración (INM)
290	CDHEZ/G/ZAC/566/2021	25	Hombre	Instituto Nacional de Migración (INM)
291	CDHEZ/G/ZAC/567/2021	38	Hombre	Instituto Nacional de Migración (INM)
292	CDHEZ/G/ZAC/568/2021	19	Hombre	Instituto Nacional de Migración (INM)
293	CDHEZ/G/ZAC/569/2021	21	Hombre	Instituto Nacional de Migración (INM)
294	CDHEZ/G/ZAC/570/2021	25	Hombre	Instituto Nacional de Migración (INM)
295	CDHEZ/G/ZAC/571/2021	25	Hombre	Instituto Nacional de Migración (INM)
296	CDHEZ/G/ZAC/572/2021	22	Hombre	Instituto Nacional de Migración (INM)
297	CDHEZ/G/ZAC/573/2021	31	Hombre	Instituto Nacional de Migración (INM)
298	CDHEZ/G/ZAC/574/2021	29	Hombre	Instituto Nacional de Migración (INM)
299	CDHEZ/G/ZAC/575/2021	24	Hombre	Instituto Nacional de Migración (INM)
300	CDHEZ/G/ZAC/576/2021	20	Hombre	Instituto Nacional de Migración (INM)
301	CDHEZ/G/ZAC/577/2021	31	Hombre	Instituto Nacional de Migración (INM)
302	CDHEZ/G/ZAC/578/2021	22	Hombre	Instituto Nacional de Migración (INM)
303	CDHEZ/G/ZAC/579/2021	22	Hombre	Instituto Nacional de Migración (INM)
304	CDHEZ/G/ZAC/580/2021	19	Hombre	Instituto Nacional de Migración (INM)
305	CDHEZ/G/ZAC/581/2021	26	Hombre	Instituto Nacional de Migración (INM)
306	CDHEZ/G/ZAC/582/2021	33	Hombre	Instituto Nacional de Migración (INM)

No.	No. Gestión	Edad	Sexo	Autoridad
307	CDHEZ/G/ZAC/583/2021	25	Mujer	Instituto Nacional de Migración (INM)
308	CDHEZ/G/ZAC/584/2021	22	Mujer	Instituto Nacional de Migración (INM)
309	CDHEZ/G/ZAC/585/2021	33	Mujer	Instituto Nacional de Migración (INM)
310	CDHEZ/G/ZAC/586/2021	21	Mujer	Instituto Nacional de Migración (INM)
311	CDHEZ/G/ZAC/587/2021	28	Mujer	Instituto Nacional de Migración (INM)
312	CDHEZ/G/ZAC/588/2021	21	Mujer	Instituto Nacional de Migración (INM)
313	CDHEZ/G/ZAC/589/2021	29	Mujer	Instituto Nacional de Migración (INM)
314	CDHEZ/G/ZAC/590/2021	23	Mujer	Instituto Nacional de Migración (INM)
315	CDHEZ/G/ZAC/591/2021	22	Mujer	Instituto Nacional de Migración (INM)
316	CDHEZ/G/ZAC/592/2021	27	Mujer	Instituto Nacional de Migración (INM)
317	CDHEZ/G/ZAC/593/2021	44	Hombre	Instituto Nacional de Migración (INM)
318	CDHEZ/G/ZAC/594/2021	41	Hombre	Instituto Nacional de Migración (INM)
319	CDHEZ/G/ZAC/595/2021	18	Hombre	Instituto Nacional de Migración (INM)
320	CDHEZ/G/ZAC/596/2021	18	Hombre	Instituto Nacional de Migración (INM)
321	CDHEZ/G/ZAC/597/2021	22	Hombre	Instituto Nacional de Migración (INM)
322	CDHEZ/G/ZAC/598/2021	27	Hombre	Instituto Nacional de Migración (INM)
323	CDHEZ/G/ZAC/599/2021	20	Hombre	Instituto Nacional de Migración (INM)
324	CDHEZ/G/ZAC/600/2021	19	Hombre	Instituto Nacional de Migración (INM)
325	CDHEZ/G/ZAC/601/2021	23	Hombre	Instituto Nacional de Migración (INM)
326	CDHEZ/G/ZAC/602/2021	26	Hombre	Instituto Nacional de Migración (INM)
327	CDHEZ/G/ZAC/603/2021	18	Hombre	Instituto Nacional de Migración (INM)
328	CDHEZ/G/ZAC/SP/604/2021	40	Hombre	Centro Regional de Reinserción Social Varonil Cieneguillas
329	CDHEZ/G/ZAC/SP/605/2021	45	Mujer	Centro Regional de Reinserción Social Varonil Cieneguillas
330	CDHEZ/G/ZAC/606/2021	42	Mujer	Fiscalía Especializada para la Atención de Desaparición Forzada y Cometida por Particulares, de la Fiscalía General de Justicia del
331	CDHEZ/G/VRP/607/2021	47	Hombre	Fiscalía de Atención Temprana de la Agencia del Ministerio Público de Pinos, Zacatecas
332	CDHEZ/G/VRP/608/2021	29	Mujer	Trabajadora Social del Sistema Municipal de Desarrollo Integral de la Familia de Pinos, Zacatecas
333	CDHEZ/G/VRT/609/2021	84	Hombre	Centro Integral de Desarrollo, de Tlaltenango, Zacatecas

No.	No. Gestión	Edad	Sexo	Autoridad
334	CDHEZ/G/VRT/610/2021	48	Mujer	Procuraduría del Centro Municipal de Desarrollo Integral de la Familia de Tlaltenango, Zacatecas
335	CDHEZ/G/VRR/611/2021	40	Hombre	Delegación de los Programas de Bienestar en el Municipio de Río Grande, Zacatecas
336	CDHEZ/G/ZAC/612/2021	51	Mujer	Departamento de Atención al Derecho Habiente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
337	CDHEZ/G/ZAC/613/2021	Sin datos	Hombre	Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (JIAPAZ)
338	CDHEZ/G/ZAC/614/2021	45	Hombre	Juzgado Familiar de Villanueva, Zacatecas
339	CDHEZ/G/ZAC/615/2021	21	Mujer	Fiscal de la Unidad Mixta de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ)
340	CDHEZ/G/ZAC/616/2021	41	Hombre	Dirección de la Escuela María Soledad Fernández de Zacatecas
341	CDHEZ/G/VRP/617/2021	34	Mujer	Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Pinos, Zacatecas
342	CDHEZ/G/ZAC/SP/618/2021	47	Mujer	Establecimiento Penitenciario de Jerez, Zacatecas
343	CDHEZ/G/ZAC/619/2021	41	Mujer	Oficina del Derecho Habiente del Instituto Mexicano del Seguro Social en Zacatecas
344	CDHEZ/G/ZAC/620/2021	40	Mujer	Fiscalía General de justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ)
345	CDHEZ/G/ZAC/621/2021	23	Hombre	Instituto Nacional de Migración (INM)
346	CDHEZ/G/ZAC/622/2021	18	Hombre	Instituto Nacional de Migración (INM)
347	CDHEZ/G/ZAC/623/2021	31	Hombre	Instituto Nacional de Migración (INM)
348	CDHEZ/G/ZAC/624/2021	25	Hombre	Instituto Nacional de Migración (INM)
349	CDHEZ/G/ZAC/625/2021	43	Hombre	Instituto Nacional de Migración (INM)
350	CDHEZ/G/ZAC/626/2021	28	Hombre	Instituto Nacional de Migración (INM)
351	CDHEZ/G/ZAC/627/2021	31	Hombre	Instituto Nacional de Migración (INM)
352	CDHEZ/G/ZAC/628/2021	18	Hombre	Instituto Nacional de Migración (INM)
353	CDHEZ/G/ZAC/629/2021	27	Hombre	Instituto Nacional de Migración (INM)
354	CDHEZ/G/ZAC/630/2021	42	Hombre	Instituto Nacional de Migración (INM)
355	CDHEZ/G/ZAC/631/2021	46	Hombre	Instituto Nacional de Migración (INM)
356	CDHEZ/G/ZAC/632/2021	35	Hombre	Instituto Nacional de Migración (INM)
357	CDHEZ/G/ZAC/633/2021	28	Hombre	Instituto Nacional de Migración (INM)
358	CDHEZ/G/ZAC/634/2021	24	Hombre	Instituto Nacional de Migración (INM)
359	CDHEZ/G/ZAC/635/2021	31	Hombre	Instituto Nacional de Migración (INM)
360	CDHEZ/G/ZAC/636/2021	19	Hombre	Instituto Nacional de Migración (INM)

No.	No. Gestión	Edad	Sexo	Autoridad
361	CDHEZ/G/ZAC/637/2021	23	Hombre	Instituto Nacional de Migración (INM)
362	CDHEZ/G/ZAC/638/2021	20	Hombre	Instituto Nacional de Migración (INM)
363	CDHEZ/G/ZAC/639/2021	19	Hombre	Instituto Nacional de Migración (INM)
364	CDHEZ/G/ZAC/640/2021	39	Hombre	Instituto Nacional de Migración (INM)
365	CDHEZ/G/ZAC/641/2021	25	Mujer	Instituto Nacional de Migración (INM)
366	CDHEZ/G/ZAC/642/2021	25	Mujer	Instituto Nacional de Migración (INM)
367	CDHEZ/G/ZAC/643/2021	43	Mujer	Instituto Nacional de Migración (INM)
368	CDHEZ/G/ZAC/644/2021	27	Mujer	Instituto Nacional de Migración (INM)
369	CDHEZ/G/ZAC/645/2021	21	Mujer	Instituto Nacional de Migración (INM)
370	CDHEZ/G/VRR/646/2021	54	Mujer	Coordinación de Protección Civil y Bomberos del Municipio de Río Grande, Zacatecas
371	CDHEZ/G/VRP/647/2021	49	Mujer	Hospital Rural No. 8 de Pinos, Zacatecas
372	CDHEZ/G/VRP/648/2021	22	Mujer	Coordinación de la Universidad Benito Juárez de Pinos, Zacatecas
373	CDHEZ/G/VRP/649/2021	29	Mujer	Instituto Municipal de la Mujer, Pinos Zacatecas
374	CDHEZ/G/ZAC/SP/650/2021	56	Mujer	Establecimiento Penitenciario Distrital de Calera, Zacatecas
375	CDHEZ/G/ZAC/651/2021	Sin datos	Mujer	Casa Hogar para jóvenes del Sistema Estatal de Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF)
376	CDHEZ/G/ZAC/652/2021	27	Mujer	Instituto Nacional de Migración (INM)
377	CDHEZ/G/ZAC/653/2021	21	Mujer	Instituto Nacional de Migración (INM)
378	CDHEZ/G/ZAC/654/2021	29	Mujer	Instituto Nacional de Migración (INM)
379	CDHEZ/G/ZAC/655/2021	23	Mujer	Instituto Nacional de Migración (INM)
380	CDHEZ/G/ZAC/656/2021	60	Mujer	Instituto Nacional de Migración (INM)
381	CDHEZ/G/ZAC/657/2021	18	Mujer	Instituto Nacional de Migración (INM)
382	CDHEZ/G/ZAC/658/2021	19	Mujer	Instituto Nacional de Migración (INM)
383	CDHEZ/G/ZAC/659/2021	32	Mujer	Instituto Nacional de Migración (INM)
384	CDHEZ/G/ZAC/660/2021	43	Hombre	Instituto Nacional de Migración (INM)
385	CDHEZ/G/ZAC/661/2021	27	Hombre	Instituto Nacional de Migración (INM)
386	CDHEZ/G/ZAC/662/2021	42	Hombre	Instituto Nacional de Migración (INM)
387	CDHEZ/G/ZAC/663/2021	31	Hombre	Instituto Nacional de Migración (INM)

No.	No. Gestión	Edad	Sexo	Autoridad
388	CDHEZ/G/ZAC/664/2021	19	Hombre	Instituto Nacional de Migración (INM)
389	CDHEZ/G/ZAC/665/2021	23	Hombre	Instituto Nacional de Migración (INM)
390	CDHEZ/G/ZAC/666/2021	20	Hombre	Instituto Nacional de Migración (INM)
391	CDHEZ/G/ZAC/667/2021	19	Hombre	Instituto Nacional de Migración (INM)
392	CDHEZ/G/ZAC/668/2021	34	Hombre	Instituto Nacional de Migración (INM)
393	CDHEZ/G/ZAC/669/2021	29	Hombre	Instituto Nacional de Migración (INM)
394	CDHEZ/G/ZAC/670/2021	21	Hombre	Instituto Nacional de Migración (INM)
395	CDHEZ/G/ZAC/671/2021	26	Hombre	Instituto Nacional de Migración (INM)
396	CDHEZ/G/ZAC/672/2021	30	Hombre	Instituto Nacional de Migración (INM)
397	CDHEZ/G/ZAC/673/2021	21	Hombre	Instituto Nacional de Migración (INM)
398	CDHEZ/G/ZAC/674/2021	62	Hombre	Instituto Nacional de Migración (INM)
399	CDHEZ/G/ZAC/675/2021	26	Hombre	Instituto Nacional de Migración (INM)
400	CDHEZ/G/ZAC/676/2021	28	Hombre	Instituto Nacional de Migración (INM)
401	CDHEZ/G/ZAC/677/2021	29	Hombre	Instituto Nacional de Migración (INM)
402	CDHEZ/G/ZAC/678/2021	35	Hombre	Instituto Nacional de Migración (INM)
403	CDHEZ/G/ZAC/679/2021	25	Hombre	Instituto Nacional de Migración (INM)
404	CDHEZ/G/ZAC/680/2021	29	Hombre	Instituto Nacional de Migración (INM)
405	CDHEZ/G/ZAC/681/2021	24	Hombre	Instituto Nacional de Migración (INM)
406	CDHEZ/G/ZAC/682/2021	32	Hombre	Instituto Nacional de Migración (INM)
407	CDHEZ/G/ZAC/683/2021	26	Hombre	Instituto Nacional de Migración (INM)
408	CDHEZ/G/ZAC/684/2021	31	Hombre	Instituto Nacional de Migración (INM)
409	CDHEZ/G/ZAC/685/2021	19	Hombre	Instituto Nacional de Migración (INM)
410	CDHEZ/G/ZAC/686/2021	22	Hombre	Instituto Nacional de Migración (INM)
411	CDHEZ/G/ZAC/687/2021	33	Hombre	Instituto Nacional de Migración (INM)
412	CDHEZ/G/VRJ/688/2021	74	Hombre	Delegación de Tránsito del Municipio de Jalpa, Zacatecas
413	CDHEZ/G/VRJ/689/2021	31	Mujer	Área Jurídica del Ayuntamiento de Jalpa, Zacatecas

No.	No. Gestión	Edad	Sexo	Autoridad
414	CDHEZ/G/VRJ/690/2021	15	Hombre	Liga de Futbol en Jalpa, Zacatecas
415	CDHEZ/G/ZAC/SP/691/2021	46	Mujer	Centro Regional de Reinserción Social Varonil Cieneguillas
416	CDHEZ/G/ZAC/SP/692/2021	73	Hombre	Establecimiento Penitenciario Distrital de Pinos, Zacatecas
417	CDHEZ/G/ZAC/SP/693/2021	50	Mujer	Centro Regional de Reinserción Social Varonil Cieneguillas
418	CDHEZ/G/ZAC/694/2021	45	Hombre	Departamento de Alcoholes de la Presidencia Municipal de Villa de Cos, Zacatecas
419	CDHEZ/G/ZAC/695/2021	Sin datos	Hombre	Hospital de la Mujer en Zacatecas
420	CDHEZ/G/ZAC/696/2021	26	Mujer	Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)
421	CDHEZ/G/VRP/697/2021	38	Hombre	Dirección de Seguridad Pública del Municipio de Pinos, Zacatecas
422	CDHEZ/G/ZAC/SP/698/2021	46	Mujer	Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)
423	CDHEZ/G/ZAC/SP/699/2021	58	Mujer	Centro Regional de Reinserción Social Varonil Cieneguillas
424	CDHEZ/G/ZAC/700/2021	41	Mujer	Hospital General de Zacatecas
425	CDHEZ/G/ZAC/701/2021	72	Hombre	Procuraduría de la Defensa de las Niñas, Niños, Adolescentes y Familia para el Sistema Estatal de Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF)
426	CDHEZ/G/ZAC/702/2021	49	Mujer	Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ)
427	CDHEZ/G/ZAC/703/2021	45	Hombre	Dirección de Policía de Seguridad Vial de Zacatecas
428	CDHEZ/G/ZAC/704/2021	42	Mujer	Instituto Nacional de Migración (INM)
429	CDHEZ/G/ZAC/705/2021	31	Mujer	Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas (UTEZ)
430	CDHEZ/G/VRR/706/2021	35	Hombre	Secretaría de Gobierno del Municipio de Cañitas de Felipe Pescador, Zacatecas
431	CDHEZ/G/VRT/707/2021	41	Hombre	Fiscalía del Ministerio Público del Teúl de González Ortega
432	CDHEZ/G/ZAC/708/2021	25	Mujer	Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Valparaíso, Zacatecas
433	CDHEZ/G/ZAC/709/2021	76	Mujer	Dirección de Catastro y Registro Público del Estado de Zacatecas
434	CDHEZ/G/ZAC/710/2021	89	Hombre	Procuraduría de la Defensa de las Niñas, Niños, Adolescentes y Familia para el Sistema Estatal de Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF)
435	CDHEZ/G/ZAC/711/2021	34	Hombre	Hospital General de Zacatecas
436	CDHEZ/G/ZAC/SP/712/2021	50	Mujer	Centro Regional de Reinserción Social Varonil Cieneguillas
437	CDHEZ/G/ZAC/713/2021	34	Hombre	Casa del Migrante Sembrando una Semilla
438	CDHEZ/G/ZAC/714/2021	75	Hombre	Fiscalía de Derechos Humanos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ)
439	CDHEZ/G/ZAC/715/2021	66	Mujer	Dirección de Policía de Seguridad Vial de Zacatecas

No.	No. Gestión	Edad	Sexo	Autoridad
440	CDHEZ/G/ZAC/SP/716/2021	64	Mujer	Centro Regional de Reinserción Social Varonil Cieneguillas
441	CDHEZ/G/ZAC/717/2021	37	Mujer	Fiscalía del Ministerio Público de la Unidad de Homicidios Dolosos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ)
442	CDHEZ/G/ZAC/718/2021	41	Mujer	Juez Comunitario de Zacatecas, Zacatecas
443	CDHEZ/G/ZAC/SP/719/2021	47	Hombre	Centro Regional de Reinserción Social Varonil Cieneguillas
444	CDHEZ/G/VRF/720/2021	34	Mujer	Ministerio Público en el Distrito Judicial de Valparaíso, Zacatecas
445	CDHEZ/G/VRF/721/2021	32	Mujer	Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia
446	CDHEZ/G/VRF/722/2021	27	Hombre	Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Zacatecas
447	CDHEZ/G/VRF/723/2021	36	Hombre	Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Zacatecas
448	CDHEZ/G/VRF/724/2021	31	Hombre	Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Zacatecas
449	CDHEZ/G/VRF/725/2021	68	Mujer	Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)

Fuente: Departamento de Orientación y Quejas.
Los datos comprenden del 1 de julio al 31 de diciembre de 2021.

II.1.2.2 Gestiones durante la Sustanciación de Expedientes

En la tabla siguiente se presentan las gestiones que se realizaron durante la sustanciación de expedientes del periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 por parte de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) con número de expediente, visitaduría que efectuó la gestión, fecha de resolución y autoridad; efectuándose 181 gestiones en las visitadurías generales y regionales.

Gestiones durante la sustantación de expedientes

No.	Expediente	Visitaduría	Fecha de resolución	Autoridad responsable
1	CDHEZ/213/2020	Primera Visitaduría General	11 de enero de 2021	Secretaría de Salud del Estado de Zacatecas (SSZ)
2	CDHEZ/501/2018	Quinta Visitaduría General	20 de enero de 2021	Secretaría de Salud del Estado de Zacatecas (SSZ)
3	CDHEZ/178/2020	Quinta Visitaduría General	25 de enero de 2021	Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas (SSP)
4	CDHEZ/403/2020	Sexta Visitaduría General	20 de enero de 2021	Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas (SSP)
5	CDHEZ/399/2020	Segunda Visitaduría General	25 de enero de 2021	Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas (JIAPAZ)
6	CDHEZ/527/2020	Segunda Visitaduría General	26 de enero de 2021	Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas (SSP)
7	CDHEZ/128/2018	Quinta Visitaduría General	29 de enero de 2021	Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ)
8	CDHEZ/002/2021	Visitaduría Regional de Río Grande	21 de enero de 2021	Presidencia Municipal de Río Grande, Zacatecas
9	CDHEZ/522/2020	Visitaduría Regional de Loreto	21 de enero de 2021	Presidencia Municipal de Ojocaliente, Zacatecas
10	CDHEZ/444/2020	Tercera Visitaduría General	26 de enero de 2021	Secretaría de Educación del Estado de Zacatecas (SEDUZAC)
11	CDHEZ/159/2020	Tercera Visitaduría General	26 de enero de 2021	Presidencia Municipal de Pánuco, Zacatecas
12	CDHEZ/492/2020	Tercera Visitaduría General	22 de enero de 2021	Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas (SSP)
13	CDHEZ/497/2020	Tercera Visitaduría General	11 de enero de 2021	Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ)
14	CDHEZ/501/2020	Sexta Visitaduría General	26 de febrero de 2021	Presidencia Municipal de Zacatecas, Zacatecas
15	CDHEZ/596/2020	Sexta Visitaduría General	26 de febrero de 2021	Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas (SSP)
16	CDHEZ/279/2020	Sexta Visitaduría General	26 de febrero de 2021	Presidencia Municipal de Zacatecas, Zacatecas
17	CDHEZ/487/2020	Tercera Visitaduría General	26 de febrero de 2021	Secretaría General de Gobierno (SGG)
18	CDHEZ/031/2021	Tercera Visitaduría General	12 de febrero de 2021	Secretaría de Salud del Estado de Zacatecas (SSZ)

No.	Expediente	Visitaduría	Fecha de resolución	Autoridad responsable
19	CDHEZ/499/2019	Quinta Visitaduría General	16 de febrero de 2021	Presidencia Municipal de Zacatecas, Zacatecas
20	CDHEZ/014/2021	Cuarta Visitaduría General	17 de diciembre de 2021	Presidencia Municipal de Zacatecas, Zacatecas
21	CDHEZ/576/2020	Cuarta Visitaduría General	15 de febrero de 2021	Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas (SSP)
22	CDHEZ/317/2020	Sexta Visitaduría General	12 de febrero de 2021	Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas (SSP)
23	CDHEZ/484/2020	Visitaduría Regional de Jalpa	16 de febrero de 2021	Presidencia Municipal de Tabasco, Zacatecas
24	CDHEZ/596/2019	Segunda Visitaduría General	15 de febrero de 2021	Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas (SSP)
25	CDHEZ/380/2020	Quinta Visitaduría General	8 de febrero de 2021	Presidencia Municipal de Zacatecas, Zacatecas
26	CDHEZ/603/2019	Quinta Visitaduría General	3 de febrero de 2021	Secretaría de Educación del Estado de Zacatecas (SEDUZAC)
27	CDHEZ/295/2019	Quinta Visitaduría General	22 de febrero de 2021	Secretaría de Educación del Estado de Zacatecas (SEDUZAC)
28	CDHEZ/070/2020	Visitaduría Regional de Fresnillo	12 de febrero de 2021	Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ)
29	CDHEZ/141/2019	Primera Visitaduría General	22 de febrero de 2021	Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF)
30	CDHEZ/332/2020	Quinta Visitaduría General	11 de marzo de 2021	Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ)
31	CDHEZ/679/2019	Segunda Visitaduría General	11 de marzo de 2021	Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas (SSP)
32	CDHEZ/537/2019	Quinta Visitaduría General	11 de marzo de 2021	Presidencia Municipal de Zacatecas, Zacatecas
33	CDHEZ/559/2020	Sexta Visitaduría General	12 de marzo de 2021	Secretaría General de Gobierno (SGG)
34	CDHEZ/662/2019	Quinta Visitaduría General	11 de marzo de 2021	Secretaría de Educación del Estado de Zacatecas (SEDUZAC)
35	CDHEZ/431/2019	Tercera Visitaduría General	16 de marzo de 2021	Secretaría de Educación del Estado de Zacatecas (SEDUZAC)
36	CDHEZ/540/2020	Tercera Visitaduría General	24 de marzo de 2021	Secretaría de la Función Pública del Estado de Zacatecas (SFP)
37	CDHEZ/510/2019	Primera Visitaduría General	25 de marzo de 2021	Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ)
38	CDHEZ/284/2020	Tercera Visitaduría General	25 de marzo de 2021	Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJEZ)
39	CDHEZ/418/2020	Visitaduría Regional de Loreto	26 de marzo de 2021	Presidencia Municipal de Villa García, Zacatecas
40	CDHEZ/067/2021	Cuarta Visitaduría General	26 de marzo de 2021	Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ)
41	CDHEZ/057/2021	Visitaduría Regional de Loreto	25 de marzo de 2021	Presidencia Municipal de Villa García, Zacatecas

No.	Expediente	Visitaduría	Fecha de resolución	Autoridad responsable
42	CDHEZ/393/2016	Segunda Visitaduría General	18 de abril de 2021	Presidencia Municipal de Zacatecas, Zacatecas
43	CDHEZ/587/2020	Tercera Visitaduría General	20 de abril de 2021	Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas (SSP)
44	CDHEZ/121/2021	Quinta Visitaduría General	15 de abril de 2021	Secretaría de Educación del Estado de Zacatecas (SEDUZAC)
45	CDHEZ/028/2021	Sexta Visitaduría General	16 de abril de 2021	Presidencia Municipal de Guadalupe, Zacatecas
46	CDHEZ/571/2020	Quinta Visitaduría General	12 de abril de 2021	Presidencia Municipal de Villa de Cos, Zacatecas
47	CDHEZ/033/2021	Quinta Visitaduría General	21 de abril de 2021	Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas (SSP)
48	CDHEZ/217/2020	Tercera Visitaduría General	29 de abril de 2021	Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas (SSP)
49	CDHEZ/575/2020	Segunda Visitaduría General	11 de mayo de 2021	Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas (SSP)
50	CDHEZ/028/2020	Visitaduría Regional de Jerez	31 de mayo de 2021	Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF)
51	CDHEZ/085/2021	Segunda Visitaduría General	7 de mayo de 2021	Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas (SSP)
52	CDHEZ/024/2021	Visitaduría Regional de Fresnillo	11 de mayo de 2021	Presidencia Municipal de Fresnillo, Zacatecas
53	CDHEZ/169/2021	Visitaduría Regional de Fresnillo	11 de mayo de 2021	Presidencia Municipal de Fresnillo, Zacatecas
54	CDHEZ/188/2018	Visitaduría Regional de Fresnillo	7 de mayo de 2021	Secretaría de Educación del Estado de Zacatecas (SEDUZAC)
55	CDHEZ/085/2020	Visitaduría Regional de Río Grande	11 de mayo de 2021	Presidencia Municipal de Gral. Francisco R. Murguía, Zacatecas
56	CDHEZ/056/2021	Visitaduría Regional de Río Grande	5 de mayo de 2021	Presidencia Municipal de Gral. Francisco R. Murguía, Zacatecas
57	CDHEZ/127/2021	Segunda Visitaduría General	11 de mayo de 2021	Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Zacatecas
58	CDHEZ/095/2021	Visitaduría Regional de Jalpa	2 de marzo de 2021	Presidencia Municipal de Jalpa, Zacatecas
59	CDHEZ/062/2021	Segunda Visitaduría General	31 de mayo de 2021	Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas (JIAPAZ)
60	CDHEZ/202/2021	Visitaduría Regional de Tlaltenango	31 de mayo de 2021	Presidencia Municipal de Tlaltenango, Zacatecas
61	CDHEZ/116/2021	Visitaduría Regional de Río Grande	31 de mayo de 2021	Presidencia Municipal de Río Grande, Zacatecas

No.	Expediente	Visitaduría	Fecha de resolución	Autoridad responsable
62	CDHEZ/005/2021	Tercera Visitaduría General	31 de mayo de 2021	Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Zacatecas
63	CDHEZ/118/2020	Visitaduría Regional de Río Grande	31 de mayo de 2021	Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ)
64	CDHEZ/161/2021	Quinta Visitaduría General	31 de mayo de 2021	Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF)
65	CDHEZ/198/20201	Sexta Visitaduría General	1 de junio de 2021	Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ)
66	CDHEZ/209/2021	Sexta Visitaduría General	9 de junio de 2021	Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas (SSP)
67	CDHEZ/518/2020	Segunda Visitaduría General	9 de junio de 2021	Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas (SSP)
68	CDHEZ/252/2021	Sexta Visitaduría General	9 de junio de 2021	Presidencia Municipal de Guadalupe, Zacatecas
69	CDHEZ/115/2020	Quinta Visitaduría General	16 de junio de 2021	Secretaría de Educación del Estado de Zacatecas (SEDUZAC)
70	CDHEZ/225/2021	Quinta Visitaduría General	16 de junio de 2021	Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas (SSP)
71	CDHEZ/282/2021	Quinta Visitaduría General	16 de junio de 2021	Secretaría de Educación del Estado de Zacatecas (SEDUZAC)
72	CDHEZ/442/2020	Segunda Visitaduría General	18 de junio de 2021	Secretaría de Salud del Estado de Zacatecas (SSZ)
73	CDHEZ/060/2021	Visitaduría Regional de Fresnillo	8 de junio de 2021	Presidencia Municipal de Fresnillo, Zacatecas
74	CDHEZ/023/2021	Quinta Visitaduría General	18 de junio de 2021	Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ)
75	CDHEZ/207/2019	Visitaduría Regional de Río Grande	28 de junio de 2021	Presidencia Municipal de Gral. Francisco R. Murguía, Zacatecas
76	CDHEZ/504/2019 y CDHEZ/506/2019	Cuarta Visitaduría General	25 de junio de 2021	Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas (SSP)
77	CDHEZ/452/2020	Cuarta Visitaduría General	16 de junio de 2021	Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ)
78	CDHEZ/270/2021	Tercera Visitaduría General	9 de junio de 2021	Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas (SSP)
79	CDHEZ/177/2021	Quinta Visitaduría General	25 de junio de 2021	Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas (SSP)
80	CDHEZ/146/2019	Cuarta Visitaduría General	18 de junio de 2021	Presidencia Municipal de Zacatecas, Zacatecas
81	CDHEZ/222/2019	Primera Visitaduría General	25 de junio de 2021	Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas (SSP)
82	CDHEZ/260/2019	Sexta Visitaduría General	25 de junio de 2021	Secretaría de Educación del Estado de Zacatecas (SEDUZAC)
83	CDHEZ/279/2021	Cuarta Visitaduría General	2 de junio de 2021	Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ)

No.	Expediente	Visitaduría	Fecha de resolución	Autoridad responsable
84	CDHEZ/260/2019	Sexta Visitaduría General	25 de junio de 2021	Secretaría de Educación del Estado de Zacatecas (SEDUZAC)
85	CDHEZ/220/2021	Quinta Visitaduría General	2 de junio de 2021	Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas (SSP)
86	CDHEZ/149/2021	Visitaduría Regional de Fresnillo	9 de junio de 2021	Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ)
87	CDHEZ/058/2021	Visitaduría Regional de Fresnillo	16 de junio de 2021	Presidencia Municipal de Fresnillo, Zacatecas
88	CDHEZ/648/2019	Visitaduría Regional de Fresnillo	9 de junio de 2021	Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ)
89	CDHEZ/578/2020	Sexta Visitaduría General	25 de junio de 2021	Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ)
90	CDHEZ/075/2021	Tercera Visitaduría General	1 de junio de 2021	Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas (SSP)
91	CDHEZ/208/2021	Quinta Visitaduría General	1 de junio de 2021	Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas (SSP)
92	CDHEZ/285/2020	Visitaduría Regional de Loreto	7 de julio de 2021	Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF)
93	CDHEZ/601/2019	Visitaduría Regional de Loreto	6 de julio de 2021	Secretaría de Educación del Estado de Zacatecas (SEDUZAC)
94	CDHEZ/012/2021	Visitaduría Regional de Jerez	8 de julio de 2021	Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas (SSP)
95	CDHEZ/061/2021	Visitaduría Regional de Jerez	19 de julio de 2021	Juzgados de Primera Instancia
96	CDHEZ/029/2020	Visitaduría Regional de Loreto	23 de julio de 2021	Secretaría de Educación del Estado de Zacatecas (SEDUZAC)
97	CDHEZ/316/2021	Visitaduría Regional de Loreto	19 de julio de 2021	Presidencia Municipal de Ojocaliente, Zacatecas
98	CDHEZ/243/2021 y CDHEZ/292/2021	Visitaduría Regional de Fresnillo	8 de julio de 2021	Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas (SSP)
99	CDHEZ/321/2021	Sexta Visitaduría General	21 de julio de 2021	Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ)
100	CDHEZ/095/2019	Segunda Visitaduría General	5 de julio de 2021	Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ)
101	CDHEZ/489/2020	Primera Visitaduría General	19 de julio de 2021	Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ)
102	CDHEZ/022/2021	Tercera Visitaduría General	6 de julio de 2021	Presidencia Municipal de Guadalupe, Zacatecas
103	CDHEZ/530/2020	Tercera Visitaduría General	8 de julio de 2021	Secretaría de Salud del Estado de Zacatecas (SSZ)

No.	Expediente	Visitaduría	Fecha de resolución	Autoridad responsable
104	CDHEZ/453/2020	Tercera Visitaduría General	7 de julio de 2021	Secretaría de Administración del Estado de Zacatecas
105	CDHEZ/204/2021	Tercera Visitaduría General	7 de julio de 2021	Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ)
106	CDHEZ/003/2021	Visitaduría Regional de Fresnillo	8 de julio de 2021	Universidad Politécnica de Zacatecas (UPZ)
107	CDHEZ/079/2021	Primera Visitaduría General	25 de agosto de 2021	Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas (JIAPAZ)
108	CDHEZ/263/2021	Quinta Visitaduría General	27 de agosto de 2021	Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial
109	CDHEZ/352/2021	Quinta Visitaduría General	25 de agosto de 2021	Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF)
110	CDHEZ/285/2021	Primera Visitaduría General	25 de agosto de 2021	Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas (SSP)
111	CDHEZ/254/2021	Segunda Visitaduría General	23 de agosto de 2021	Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas (JIAPAZ)
112	CDHEZ/114/2020	Visitaduría Regional de Río Grande	9 de agosto de 2021	Secretaría de Educación del Estado de Zacatecas (SEDUZAC)
113	CDHEZ/075/2020	Visitaduría Regional de Jerez	6 de agosto de 2021	Presidencia Municipal de Jerez de García Salinas, Zacatecas
114	CDHEZ/151/2021	Visitaduría Regional de Loreto	6 de agosto de 2021	Presidencia Municipal de Jerez de García Salinas, Zacatecas
115	CDHEZ/364/2019	Visitaduría Regional de Jerez	7 de agosto de 2021	Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas (SSP)
116	CDHEZ/194/2020	Quinta Visitaduría General	4 de abril de 2021	Presidencia Municipal de Villanueva, Zacatecas
117	CDHEZ/078/2021	Quinta Visitaduría General	6 de agosto de 2021	Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF)
118	CDHEZ/478/2020	Quinta Visitaduría General	5 de agosto de 2021	Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas (SSP)
119	CDHEZ/488/2020	Sexta Visitaduría General	28 de septiembre de 2021	Presidencia Municipal de Trancoso, Zacatecas
120	CDHEZ/323/2021	Segunda Visitaduría General	28 de septiembre de 2021	Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ)
121	CDHEZ/101/2021	Quinta Visitaduría General	9 de septiembre de 2021	Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ)
122	CDHEZ/663/2019	Quinta Visitaduría General	8 de septiembre de 2021	Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ)
123	CDHEZ/370/2021	Segunda Visitaduría General	8 de septiembre de 2021	Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas (SSP)
124	CDHEZ/091/2021	Visitaduría Regional de Loreto	30 de septiembre de 2021	Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas (SSP)

No.	Expediente	Visitaduría	Fecha de resolución	Autoridad responsable
125	CDHEZ/437/2020	Sexta Visitaduría General	30 de septiembre de 2021	Secretaría General de Gobierno (SGG)
126	CDHEZ/280/2021	Visitaduría Regional de Tlaltenango	4 de octubre de 2021	Presidencia Municipal de Tlaltenango, Zacatecas
127	CDHEZ/354/2021	Cuarta Visitaduría General	29 de septiembre de 2021	Presidencia Municipal de Guadalupe, Zacatecas
128	CDHEZ/420/2021	Cuarta Visitaduría General	29 de septiembre de 2021	Secretaría de Salud del Estado de Zacatecas (SSZ)
129	CDHEZ/443/2021	Visitaduría Regional de Jerez	30 de septiembre de 2021	Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ)
130	CDHEZ/568/2020	Visitaduría Regional de Loreto	30 de septiembre de 2021	Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas (SSP)
131	CDHEZ/168/2021	Quinta Visitaduría General	28 de septiembre de 2021	Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ)
132	CDHEZ/463/2020, CDHEZ/464/2020, CDHEZ/465/2020 y CDHEZ/045/2021	Visitaduría Regional de Fresnillo	18 de octubre de 2021	Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas (SSP)
133	CDHEZ/458/2021	Visitaduría Regional de Tlaltenango	19 de octubre de 2021	Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas (SSP)
134	CDHEZ/465/2021	Visitaduría Regional de Tlaltenango	18 de octubre de 2021	Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas (SSP)
135	CDHEZ/464/2021	Visitaduría Regional de Tlaltenango	19 de octubre de 2021	Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas (SSP)
136	CDHEZ/463/2021	Visitaduría Regional de Tlaltenango	19 de octubre de 2021	Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas (SSP)
137	CDHEZ/329/2021	Visitaduría Regional de Loreto	18 de octubre de 2021	Presidencia Municipal de Villa García, Zacatecas
138	CDHEZ/315/2021	Tercera Visitaduría General	27 de octubre de 2021	Secretaría de Administración del Estado de Zacatecas
139	CDHEZ/328/2021	Segunda Visitaduría General	27 de octubre de 2021	Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas (SSP)
140	CDHEZ/277/2021	Tercera Visitaduría General	25 de octubre de 2021	Secretaría de Educación del Estado de Zacatecas (SEDUZAC)
141	CDHEZ/468/2021	Visitaduría Regional de Río Grande	5 de noviembre de 2021	Presidencia Municipal de Río Grande, Zacatecas
142	CDHEZ/320/2021	Quinta Visitaduría General	11 de octubre de 2021	Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ)
143	CDHEZ/319/2021	Tercera Visitaduría General	12 de octubre de 2021	Secretaría de Educación del Estado de Zacatecas (SEDUZAC)

No.	Expediente	Visitaduría	Fecha de resolución	Autoridad responsable
144	CDHEZ/467/2021	Cuarta Visitaduría General	12 de octubre de 2021	Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas (SSP)
145	CDHEZ/432/2021	Cuarta Visitaduría General	15 de octubre de 2021	Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF)
146	CDHEZ/486/2021	Cuarta Visitaduría General	27 de octubre de 2021	Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ)
147	CDHEZ/255/2021	Primera Visitaduría General	15 de octubre de 2021	Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ)
148	CDHEZ/182/2021	Tercera Visitaduría General	18 de octubre de 2021	Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas (SSP)
149	CDHEZ/295/2021	Visitaduría Regional de Jalpa	29 de octubre de 2021	Presidencia Municipal de Juchipila, Zacatecas
150	CDHEZ/526/2020	Primera Visitaduría General	19 de octubre de 2021	Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas (SSP)
151	CDHEZ/455/2021	Cuarta Visitaduría General	18 de octubre de 2021	Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ)
152	CDHEZ/341/2021	Visitaduría Regional de Jalpa	19 de octubre de 2021	Presidencia Municipal de Huanusco, Zacatecas
153	CDHEZ/231/2021	Visitaduría Regional de Tlaltenango	29 de septiembre de 2021	Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ)
154	CDHEZ/350/2021	Tercera Visitaduría General	27 de octubre de 2021	Secretaría General de Gobierno (SGG)
155	CDHEZ/171/2021	Cuarta Visitaduría General	23 de noviembre de 2021	Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ)
156	CDHEZ/294/2021	Segunda Visitaduría General	22 de noviembre de 2021	Secretaría de Economía
157	CDHEZ/418/2021	Segunda Visitaduría General	18 de noviembre de 2021	Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas (SSP)
158	CDHEZ/108/2021	Cuarta Visitaduría General	10 de noviembre de 2021	Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas (SSP)
159	CDHEZ/483/2021	Tercera Visitaduría General	22 de noviembre de 2021	Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas (SSP)
160	CDHEZ/424/2021	Quinta Visitaduría General	18 de noviembre de 2021	Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas (JIAPAZ)
161	CDHEZ/427/2021	Quinta Visitaduría General	22 de noviembre de 2021	Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ)
162	CDHEZ/506/2021	Tercera Visitaduría General	20 de noviembre de 2021	Secretaría de Educación del Estado de Zacatecas (SEDUZAC)
163	CDHEZ/335/2021	Sexta Visitaduría General	1 de noviembre de 2021	Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ)
164	CDHEZ/530/2020	Tercera Visitaduría General	22 de noviembre de 2021	Secretaría de Salud del Estado de Zacatecas (SSZ)
165	CDHEZ/139/2020	Sexta Visitaduría General	22 de noviembre de 2021	Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ)
166	CDHEZ/437/2021	Tercera Visitaduría General	22 de noviembre de 2021	Secretaría de Salud del Estado de Zacatecas (SSZ)

No.	Expediente	Visitaduría	Fecha de resolución	Autoridad responsable
167	CDHEZ/607/2021	Cuarta Visitaduría General	20 de diciembre de 2021	Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ)
168	CDHEZ/638/2021	Sexta Visitaduría General	20 de diciembre de 2021	Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas (SSP)
169	CDHEZ/584/2021	Cuarta Visitaduría General	20 de diciembre de 2021	Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ)
170	CDHEZ/039/2021	Visitaduría Regional de Jerez	9 de diciembre de 2021	Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ)
171	CDHEZ/456/2021	Sexta Visitaduría General	20 de diciembre de 2021	Junta de Protección y Conservación de Monumentos y Zonas Típicas del Estado de Zacatecas
172	CDHEZ/609/2021	Sexta Visitaduría General	20 de diciembre de 2021	Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas (SSP)
173	CDHEZ/613/2021	Segunda Visitaduría General	20 de diciembre de 2021	Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas (SSP)
174	CDHEZ/609/2021	Visitaduría Regional de Fresnillo	8 de diciembre de 2021	Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ)
175	CDHEZ/453/2021	Tercera Visitaduría General	9 de diciembre de 2021	Secretaría de Educación del Estado de Zacatecas (SEDUZAC)
176	CDHEZ/522/2021	Quinta Visitaduría General	9 de diciembre de 2021	Secretaría de Seguridad Pública
177	CDHEZ/675/2019	Segunda Visitaduría General	8 de diciembre de 2021	Secretaría de Educación del Estado de Zacatecas (SEDUZAC)
178	CDHEZ/440/2021	Visitaduría Regional de Fresnillo	20 de diciembre de 2021	Presidencia Municipal de Fresnillo, Zacatecas
179	CDHEZ/026/2021	Visitaduría Regional de Jerez	20 de diciembre de 2021	Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ)
180	CDHEZ/006/2021	Visitaduría Regional de Jerez	20 de diciembre de 2021	Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ)
181	CDHEZ/512/2021	Visitaduría Regional de Jalpa	20 de diciembre de 2021	Presidencia Municipal de Jalpa, Zacatecas

Fuente: Coordinación General de Asuntos Jurídicos.
Los datos comprenden del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021.

II.1.2.3 Gestiones relacionadas con casos de Coronavirus (COVID-19)

En la tabla siguiente se presentan las gestiones que se realizaron durante el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 por parte de este Organismo Defensor de los Derechos Humanos sobre casos relacionados con Coronavirus (COVID-19), registrando 18 gestiones sobre esta emergencia sanitaria.

Gestiones por COVID-19 en el año 2021

No.	No. Gestiones	Región	Fecha	Autoridad para Informe
1	CDHEZ/G/ZAC/SP/004/2021	Zacatecas	10 de diciembre de 2020	Comisión de Derechos Humanos de Tamaulipas
2	CDHEZ/G/VRP/007/2021	Pinos	21 de enero de 2021	Secretaría de Salud del Estado de Zacatecas
3	CDHEZ/G/ZAC/010/2021	Zacatecas	22 de enero de 2021	Departamento de Atención al Derecho Habiente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
4	CDHEZ/G/ZAC/SP/012/2021	Zacatecas	13 de enero de 2021	Centro Regional de Reinserción Social Varonil Cieneguillas
5	CDHEZ/G/ZAC/SP/013/2021	Zacatecas	13 de enero de 2021	Comisión Nacional de los Derechos Humanos
6	CDHEZ/G/ZAC/SP/040/2021	Zacatecas	2 de febrero de 2021	Establecimiento Penitenciario Distrital de Loreto, Zacatecas
7	CDHEZ/G/ZAC/086/2021	Zacatecas	10 de marzo de 2021	Departamento de Atención al Derecho Habiente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE)
8	CDHEZ/G/ZAC/117/2021	Zacatecas	13 de marzo de 2021	Hospital General de Zacatecas
9	CDHEZ/G/VRF/139/2021	Fresnillo	20 de abril de 2021	Clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social en Fresnillo
10	CDHEZ/G/ZAC/151/2021	Zacatecas	5 de abril de 2021	Dirección de Atención Médica del Hospital General de Zacatecas
11	CDHEZ/G/ZAC/SP/210/2021	Zacatecas	12 de mayo de 2021	Centro Regional de Reinserción Social Varonil Cieneguillas
12	CDHEZ/G/VRF/225/2021	Fresnillo	24 de mayo de 2021	Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Fresnillo
13	CDHEZ/G/ZAC/325/2021	Zacatecas	15 de julio de 2021	Instituto Nacional de Migración (INM)
14	CDHEZ/G/VRR/369/2021	Río Grande	23 de septiembre de 2021	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Clínica de Bienestar en Río Grande, Zacatecas

No.	No. Gestiones	Región	Fecha	Autoridad para Informe
15	CDHEZ/G/ZAC/SP/380/2021	Zacatecas	15 de septiembre de 2021	Centro Estatal de Reinserción Social Femenil Cieneguillas
16	CDHEZ/G/ZAC/489/2021	Zacatecas	4 de octubre de 2021	Clínica No. 8 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
17	CDHEZ/G/VRR/611/2021	Río Grande	8 de noviembre de 2021	Delegación de los Programas de Bienestar en el Municipio de Río Grande, Zacatecas
18	CDHEZ/G/ZAC/695/2021	Zacatecas	23 de noviembre de 2021	Hospital de la Mujer Zacatecana

Fuente: Coordinación General de Asuntos Jurídicos y Departamento de Orientación y Quejas.
Los datos comprenden del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021.

II.1.3. Quejas recibidas

II.1.3.1. Quejas recibidas durante el segundo semestre de 2021

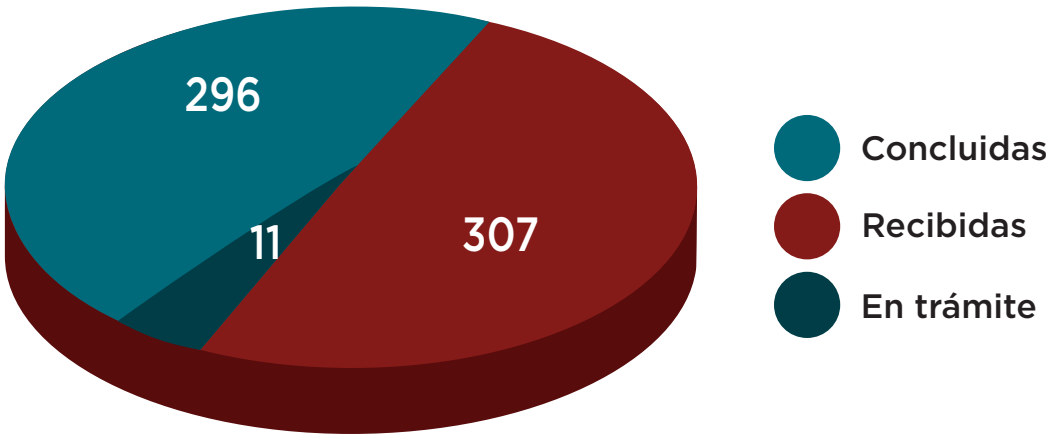
En el periodo que se informa la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) a través de sus oficinas centrales y en las ocho visitadurías regionales que se ubican en Fresnillo, Jalpa, Jerez de García Salinas, Loreto, Pinos, Río Grande, Sombrerete y Tlaltenango; se recibieron 307 quejas y se concluyeron 296 quejas del año 2021, en el periodo que se informa.

Quejas recibidas durante el segundo semestre de 2021

Recibidas	En trámite	Concluidas
307	11	296

Quejas recibidas durante el Segundo Semestre de 2021

Fuente: Departamento de Orientación y Quejas.
Los datos comprenden información del 1 de julio al 31 de diciembre de 2021.



II.1.3.2. Quejas recibidas por sexo

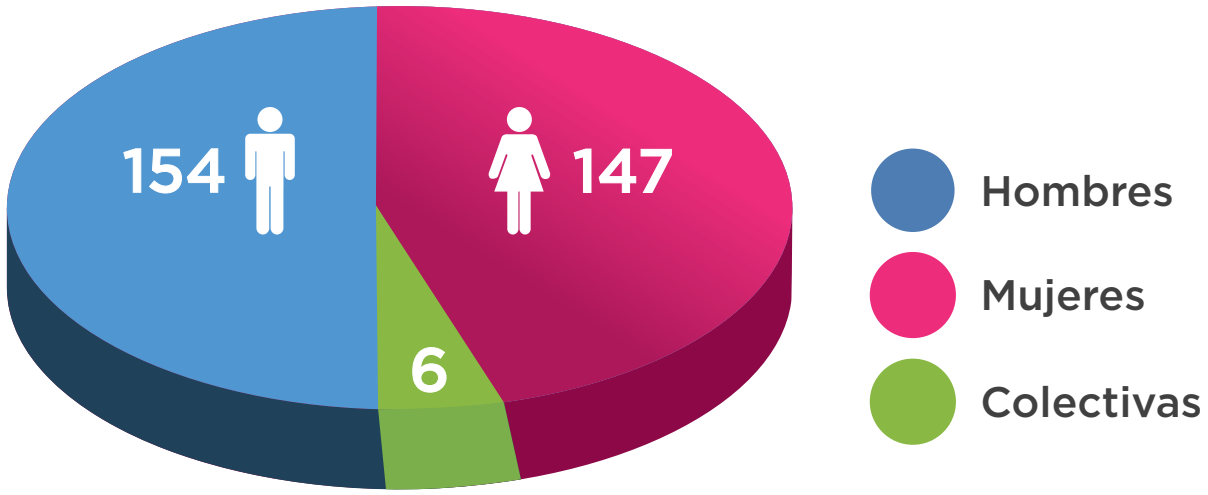
Las quejas atendidas en la CDHEZ fueron interpuestas por 147 mujeres y 154 hombres, lo que en porcentaje representa el 47.89 por ciento y 50.16 por ciento, respectivamente. Así como 6 quejas colectivas que corresponden a 1.95 por ciento.

Quejas recibidas por sexo

Mujeres	Hombres	Colectivas	Total
147	154	6	307

Quejas Clasificadas
por sexo

Fuente: Departamento de Orientación y Quejas.
Los datos comprenden información del 1 de julio al 31 de diciembre de 2021.



II.1.3.3. Quejas recibidas por grupo etario

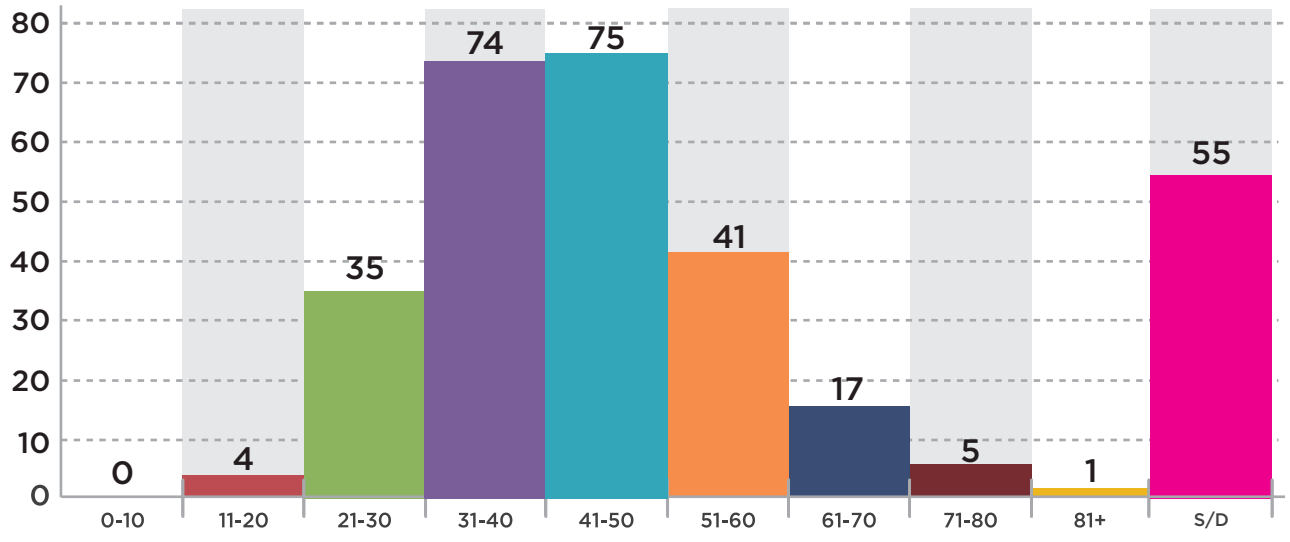
Las quejas recibidas de acuerdo al grupo etario en el Organismo Defensor de los Derechos Humanos del 1 de julio al 31 de diciembre de 2021 fueron interpuestas por 4 personas menores de 20 años, 35 personas en una franja etaria de 21 a 30 años, 74 personas en edades de 31 a 40 años, 75 personas en el rango de edad de 41 a 50 años, 41 personas en una franja etaria de 51 a 60 años, 17 personas en edades de 61 a 70 años, 5 personas en una franja etaria de 71 a 80 años, 1 persona de 81 años o más y 55 personas sin datos de identificación con respecto a su edad.

Quejas por grupo etario, recibidas durante el Segundo Semestre de 2021

Grupo etario	Total
0-10	0
11-20	4
21-30	35
31-40	74
41-50	75
51-60	41
61-70	17
71-80	5
81+	1
Sin datos	55
Total	307

Quejas recibidas por
por grupo etario

Fuente: Departamento de Orientación y Quejas
Los datos comprenden información del 1 de julio al 31 de diciembre de 2021.

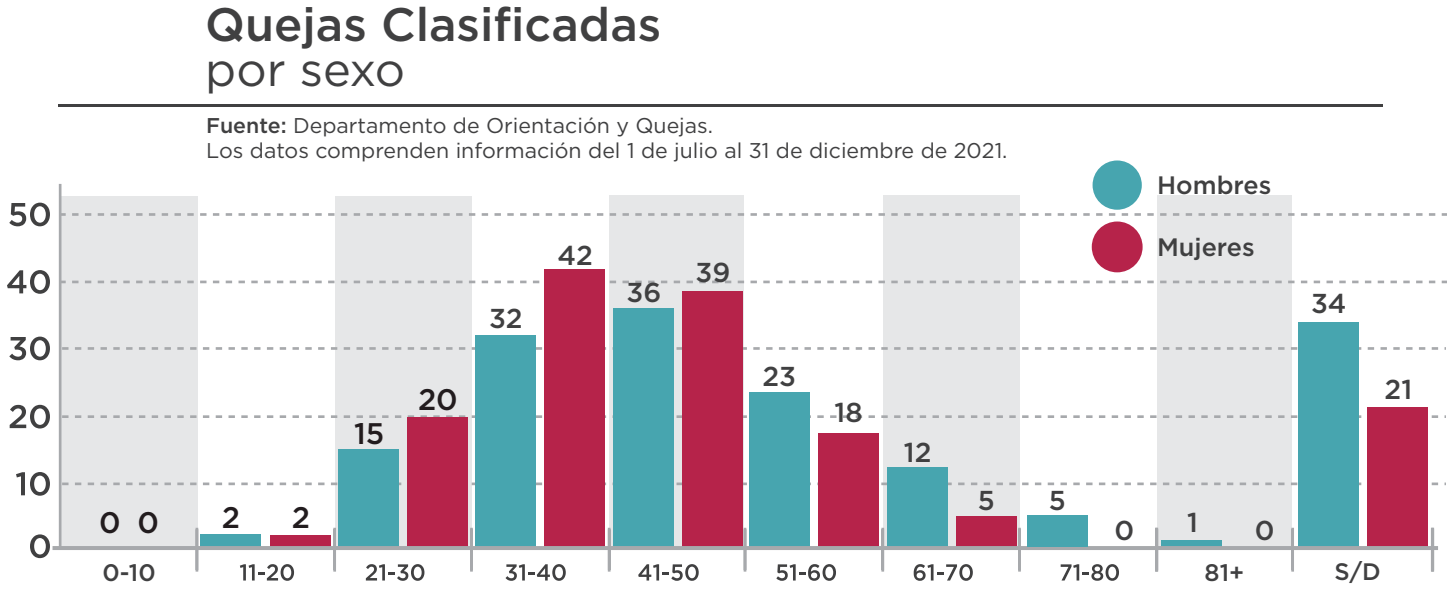


II.1.3.4. Quejas recibidas por grupo etario y sexo

Las quejas recibidas de acuerdo al grupo etario y sexo durante el segundo semestre del año 2021 fueron interpuestas por 2 mujeres y 2 hombres menores de 20 años, 20 mujeres y 15 hombres en el rango de edad de 21 a 30 años, 42 mujeres y 32 hombres en la franja etaria de 31 a 40 años, 39 mujeres y 36 hombres en el rango de edad de 41 a 50 años, 18 mujeres y 23 hombres en la franja etaria de 51 a 60 años, 5 mujeres y 12 hombres en el rango de edad de 61 a 70 años, 5 hombres en la franja etaria de 71 a 80 años, 1 mujer mayor de 81 años, así como 21 mujeres y 34 hombres sin datos de edad.

Quejas por grupo etario y sexo, recibidas durante el Segundo Semestre de 2021

Grupo etario	Mujeres	Hombres	Total
0-10	0	0	0
11-20	2	2	4
21-30	20	15	35
31-40	42	32	74
41-50	39	36	75
51-60	18	23	41
61-70	5	12	17
71-80	0	5	5
81+	0	1	1
Sin datos	21	34	55
Total	147	160	307



II.1.3.5. Quejas recibidas por Visitaduría

En el periodo que se informa las quejas recibidas por Visitaduría fueron de la siguiente manera: 27 en la Primera Visitaduría General, 25 en la Segunda Visitaduría General, 58 en la Tercera Visitaduría General, 30 en la Cuarta Visitaduría General, 25 en la Quinta Visitaduría General, 30 en la Sexta Visitaduría General, 37 en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 19 en la Visitaduría Regional de Fresnillo, 9 en la Visitaduría Regional de Jalpa, 12 en la Visitaduría Regional de Jerez de García Salinas, 13 en la Visitaduría Regional de Loreto, 3 en la Visitaduría Regional de Pinos, 11 en la Visitaduría Regional de Río Grande y 8 en la Visitaduría Regional de Tlaltenango.

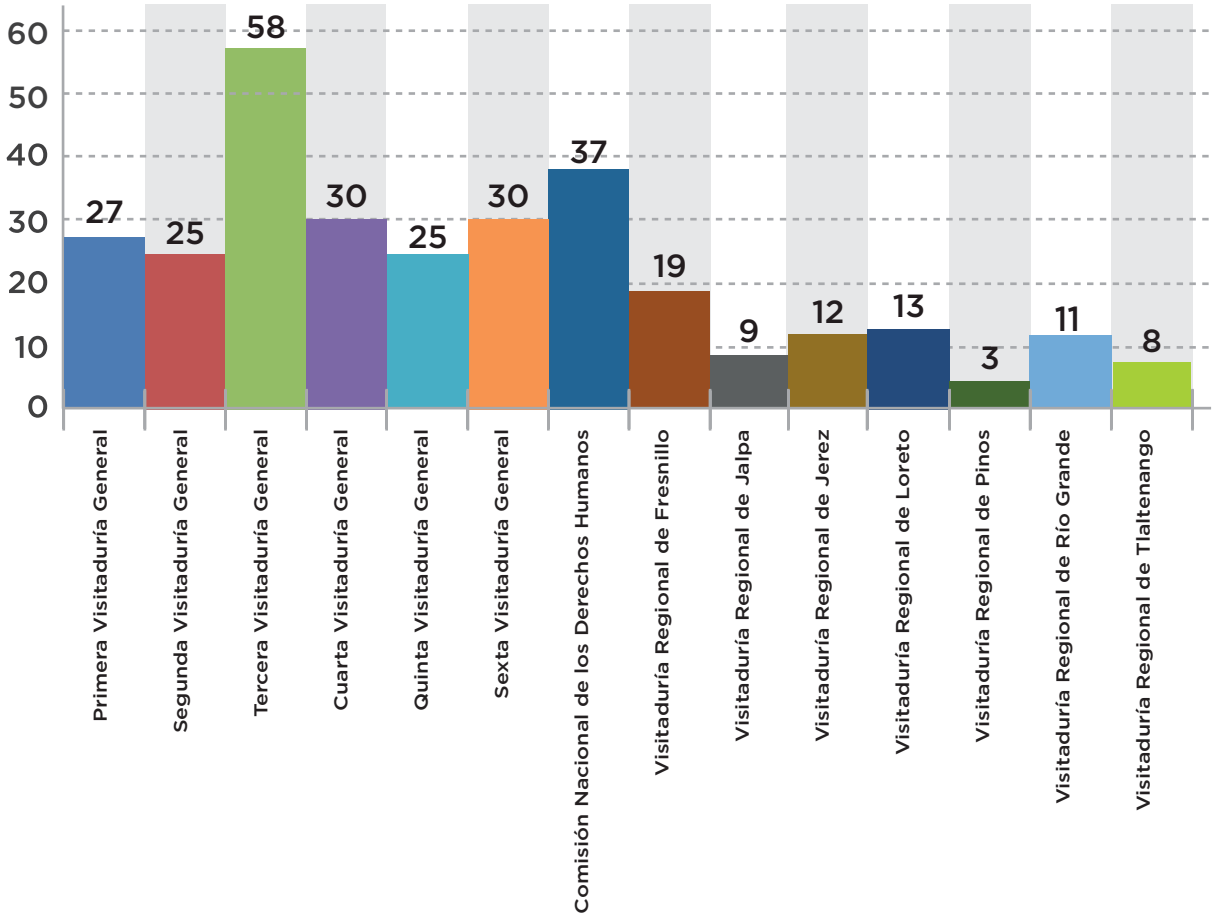
Quejas recibidas por Visitaduría, durante el Segundo Semestre 2021

Unidad Administrativa	Número
Primera Visitaduría General	27
Segunda Visitaduría General	25
Tercera Visitaduría General	58
Cuarta Visitaduría General	30
Quinta Visitaduría General	25
Sexta Visitaduría General	30
Comisión Nacional de los Derechos Humanos	37
Visitaduría Regional de Fresnillo	19
Visitaduría Regional de Jalpa	9
Visitaduría Regional de Jerez	12
Visitaduría Regional de Loreto	13
Visitaduría Regional de Pinos	3
Visitaduría Regional de Río Grande	11
Visitaduría Regional de Tlaltenango	8
Totales	**307**

Fuente: Departamento de Orientación y Quejas.
Los datos comprenden información del 1 de julio al 31 de diciembre de 2021.

Quejas Recibidas
por visitaduría

Fuente: Departamento de Orientación y Quejas.
Los datos comprenden información del 1 de julio al 31 de diciembre de 2021.



II.1.3.6. Quejas penitenciarias

Durante el periodo que se informa se presentaron 45 quejas penitenciarias, de las cuales 10 se encuentran en trámite y 35 concluidas.

Quejas Penitenciarias

Conclusión	Cantidad
En trámite	10
Concluidas	35
Total	45

Fuente: Departamento de Orientación y Quejas.
Los datos comprenden información del 1 de julio al 31 de diciembre de 2021.

II.1.3.7. Quejas penitenciarias, clasificadas por autoridades presuntas infractoras

En el periodo que se informa las quejas penitenciarias por autoridades presuntamente infractoras fueron 53, de las cuales se registraron las siguientes autoridades presuntamente infractoras: 17 Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Zacatecas; 9 Establecimientos Penitenciaros Distritales; 4 Centro Estatal de Reinserción Social Femenil Cieneguillas; 5 Centro de Internamiento y Atención Integral Juvenil (CIAJ);1 Policía Estatal Preventiva; 2 Centro Federal de Reinserción Social en Ramos Arizpe Coahuila; 3 Dirección de Prevención y Reinserción Social en el Estado; 2 Centro Federal de Readaptación Social No. 14 C.P.S. de Durango; 2 Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo; 1 Agencia del Ministerio Público del Distrito Judicial de Fresnillo; 1 Centro Federal de Reinserción Social No. 17 en Michoacán; 1 Centro Federal de Reinserción Social No. 12 de Ocampo; 1 Centro Federal de Reinserción Social No. 13 de Oaxaca; 1 Policía de Investigación de la (FGJEZ); 1 Policía Penitenciaria del Grupo de Traslados; 1 Policía Procesal y 1 Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas (SSP).

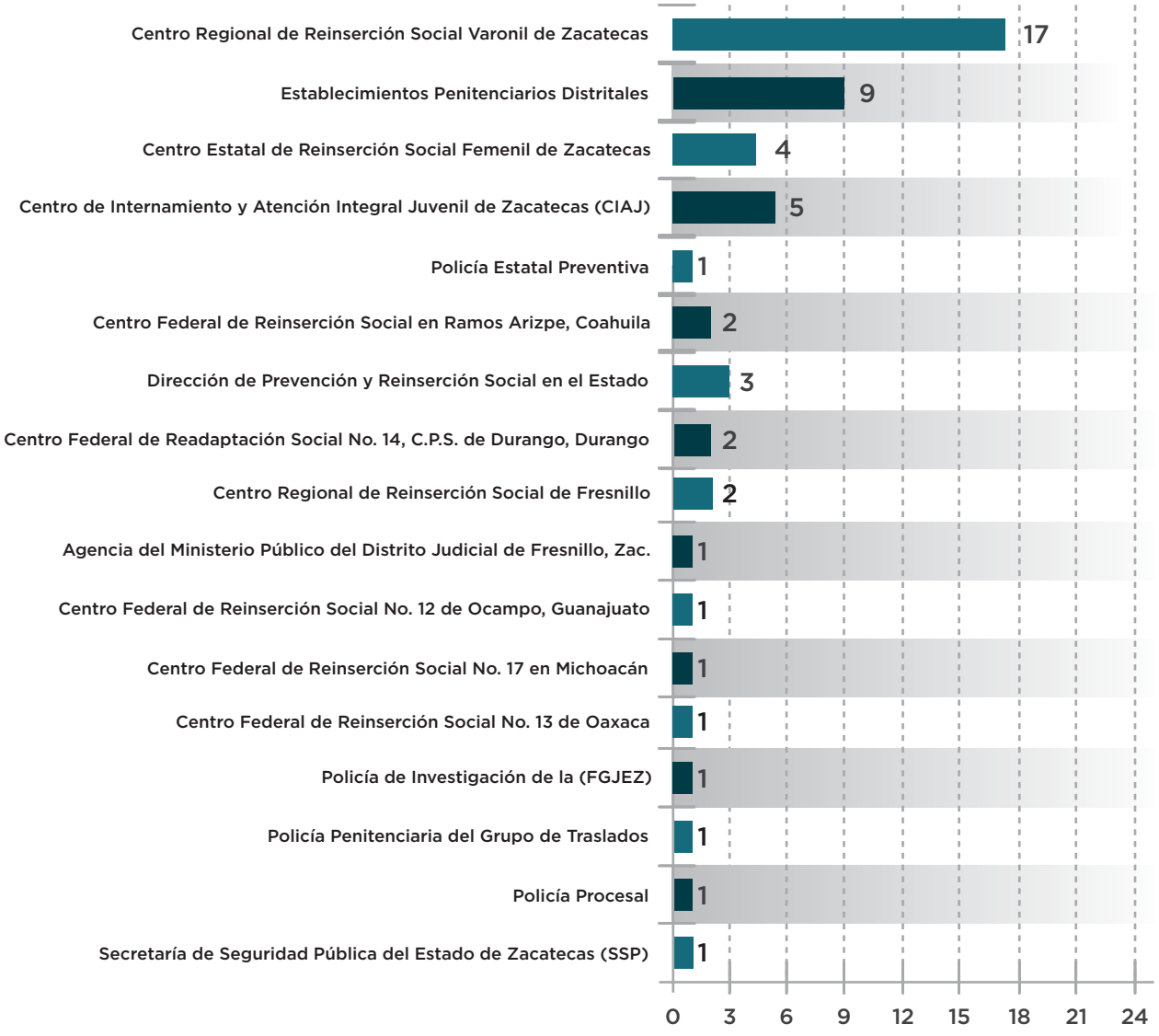
Quejas Penitenciarias

Autoridades en las Quejas Penitenciarias	Cantidad
Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Zacatecas	17
Establecimientos Penitenciarios Distritales	9
Centro Estatal de Reinserción Social Femenil Cieneguillas	4
Centro de Internamiento y Atención Integral Juvenil de Zacatecas (CIAJ)	5
Policía Estatal Preventiva (PEP)	1
Centro Federal de Reinserción Social en Ramos Arizpe, Coahuila	2
Dirección de Prevención y Reinserción Social en el Estado	3
Centro Federal de Readaptación Social No. 14, C.P.S. de Durango, Durango	2
Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo	2
Agencia del Ministerio Público del Distrito Judicial de Fresnillo, Zac.	1
Centro Federal de Reinserción Social No. 17 en Michoacán	1

Autoridades en las Quejas Penitenciarias	Cantidad
Centro Federal de Reinserción Social No. 12 de Ocampo, Guanajuato	1
Centro Federal de Reinserción Social No. 13 de Oaxaca	1
Policía de Investigación de la (FGJEZ)	1
Policía Penitenciaria del Grupo de Traslados	1
Policía Procesal	1
Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas (SSP)	1
Total	53

Quejas Penitenciarias
por autoridades presuntamente infractoras

Fuente: Departamento de Orientación y Quejas.
Los datos comprenden información del 1 de julio al 31 de diciembre de 2021.



II.1.4. Sustanciación y Resolución de Expedientes

II.1.4.1. Conclusión de Expedientes

II.1.4.1.1. Quejas concluidas en el Segundo Semestre del ejercicio, de expedientes del año 2021, clasificadas por tipo de resolución

Durante el Segundo Semestre del año 2021 se realizaron 296 resoluciones de expedientes de queja del ejercicio 2021, mismas que fueron clasificadas por tipo de resolución en los siguientes términos: 5 Incompetencias, 50 Desistimientos, 13 Falta de interés, 8 Conciliaciones, 64 Solucionados durante su trámite, 21 Acuerdos de No Responsabilidad, 1 Recomendación, 38 Remitidas a la CNDH, 2 Falta de materia, 25 Insuficiencia de pruebas, 17 Quejas no presentadas, 46 Improcedencias, 3 Hechos no constitutivos de violaciones a los derechos humanos y 3 remitidas a otra Comisión de Derechos Humanos.

Quejas concluidas en el Segundo Semestre del ejercicio, de expedientes del año 2021, clasificadas por tipo de resolución

Resoluciones	2021
Incompetencias	5
Desistimientos	50
Falta de interés	13
Conciliaciones	8
Solucionados durante su trámite	64
Acuerdos de No Responsabilidad	21
Recomendaciones	1
Remitidas a la CNDH	38
Faltas de materia	2
Insuficiencias de pruebas	25
No presentadas	17
Improcedencias	46
Hechos no constitutivos de violaciones a derechos humanos	3
Remitidas a otra CEDH	3
Total	296

Fuente: Coordinación General de Asuntos Jurídicos.
Los datos comprenden del 1 de julio al 31 de diciembre de 2021.

II.1.4.1.2. Quejas concluidas de expedientes del Segundo Semestre del año 2021, clasificadas por tipo de resolución y año de recepción

Durante el segundo semestre del año 2021 se realizaron 398 resoluciones de expedientes de queja. Se efectuaron: 296 resoluciones del año 2021, 55 resoluciones del año 2020, 45 resoluciones del año 2019 y 2 resoluciones del año 2017.

Quejas concluidas de la Segunda Gaceta del año 2021, por tipo de resolución y año de recepción

Resoluciones	2017	2018	2019	2020	2021	Total
Incompetencias	0	0	1	1	5	7
Desistimientos	0	0	1	8	50	59
Falta de interés	0	0	0	2	13	15
Conciliaciones	0	0	0	2	8	10
Solucionados durante su trámite	0	0	5	17	64	86
Acuerdos de No Responsabilidad	0	0	11	7	21	39
Recomendaciones	2	0	12	8	1	23
Remitidas a la CNDH	0	0	0	0	38	38
Faltas de materia	0	0	0	1	2	3
Insuficiencias de pruebas	0	0	9	8	25	42
No presentadas	0	0	0	0	17	17
Improcedencias	0	0	6	1	46	53
Hechos no constitutivos de violaciones a derechos humanos	0	0	0	0	3	3
No se identificó la autoridad	0	0	0	0	0	0
Remitidas a otra CEDH	0	0	0	0	3	3
Total	2	0	45	55	296	398

Fuente: Dirección General de Asuntos Jurídicos.
Los datos comprenden la información del 1 de julio al 31 de diciembre de 2021.

RESOLUCIONES

Expediente: CDHEZ/218/2019

Tipo de queja: Oficiosa.

Persona agraviada: VD†, persona privada de su libertad en el Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo, Zacatecas.

Autoridades responsables:
I. Personal de seguridad y custodia del Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo, Zacatecas.
II. Dirección General de Prevención y Reinserción Social del Estado de Zacatecas.

Derechos humanos vulnerados:
I. Derecho a la integridad personal y a la vida, en relación con el deber del Estado garante de las personas privadas de su libertad.

Zacatecas, Zac., a 19 de julio de 2021, una vez concluida la investigación de los hechos que motivaron el expediente CDHEZ/218/2019, y analizado el proyecto presentado por la Visitaduría Regional de Fresnillo, la suscrita aprobó, de conformidad con los artículos 4, 8 fracción VIII, 17 fracción V, 37, 51, 53 y 56 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, en relación con lo dispuesto por los numerales 27, fracción VIII, 40, 161, fracción X, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 y 175 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, la **Recomendación 35/2021**, que se dirige a la autoridad siguiente:

MTRO. ARTURO LÓPEZ BAZÁN, Secretario de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas.

R E S U L T A N D O;

I. DE LA CONFIDENCIALIDAD.

1. De conformidad con los artículos 6º, apartado A, fracción II y 16, párrafo segundo, ambos de la Constitución Política de los Estados Mexicanos y los artículos 23 y 85 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, los datos personales, así como aquellos relativos a la vida privada y familiar, permanecerán confidenciales, ya que no tienen el carácter de públicos.

II. RELATORÍA DE LOS HECHOS Y OBJETO DE LA CONTROVERSIA.

1. En fecha 15 de mayo de 2019, este Organismo Estatal recibió escrito signado por el **LIC. ANTONIO SOLÍS VELÁZQUEZ**, en ese tiempo, Director del Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo, Zacatecas, mediante el cual informó sobre el deceso de **VD†**, quien se encontraba privado de su libertad en dicho establecimiento penitenciario.

En concordancia con lo dispuesto por el artículo 30, párrafo tercero, de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, así como en el numeral 63, fracción V, del Reglamento que rige su actuar, en fecha 22 de mayo de 2019, se radicó queja oficiosa, por los hechos en que perdiera la vida **VD†**, quien se encontraba privado de su libertad en el Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo, Zacatecas.

Por razón de turno, en esa misma fecha, se remitió la queja a la Visitaduría Regional de Fresnillo, de este Organismo, bajo el número de expediente citado al rubro, a efecto de formular el acuerdo de calificación de ésta, de conformidad con lo dispuesto por los artículos

123 y 124 del Reglamento de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas.

El 24 de mayo de 2019, la queja se calificó como presuntos hechos violatorios de derechos humanos.

2. Los hechos materia de la queja consistieron en lo siguiente:
Mediante oficio número **SSP/DGPRS/CF/1411/2019**, de fecha 15 de mayo de 2019, el **LIC. ANTONIO SOLÍS VELÁZQUEZ**, otrora Director del Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo, Zacatecas, informó al **INSPECTOR ADÁN ROSARIO JIMÉNEZ SOLANO**, entonces Director General de Prevención y Reinserción Social del Estado, sobre el deceso de **VD†**, quien se encontraba privado de su libertad en dicho establecimiento penitenciario.

De dicho oficio, marcó copia a este Organismo y explicó que, en fecha 15 de mayo de 2019, tras realizar un rondín por el área de Conductas Especiales y/o área médica del centro penitenciario en mención, el **C. REYNALDO CAMARILLO MARTÍNEZ**, personal de Seguridad y Custodia, encontró el cuerpo sin vida del señor **VD†**, en el interior de la estancia número 1.

3. La autoridad involucrada, rindió el informe respectivo:
   a) En fecha 14 de julio de 2019, el **LIC. ANTONIO SOLÍS VELÁZQUEZ**, otrora Director del Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo, Zacatecas, rindió informe de autoridad correspondiente.

III. COMPETENCIA.

1. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas es competente, en términos de los artículos 1º, 4º, 6º, 8º fracción VII, inciso A) y 31 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, en relación con los numerales 15, 22 y 23 de su Reglamento Interno, debido a que la queja se promueve en contra de servidores públicos de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, dependientes de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas, por hechos ocurridos en el año 2019.

2. De conformidad con el artículo 124, fracción I del Reglamento Interior de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, este Organismo advierte que, de los hechos materia de la queja, se puede presumir la violación de los derechos humanos de la parte agraviada, así como la responsabilidad por parte de los servidores públicos señalados.

3. Esta Comisión, acreditó la violación de los siguientes derechos:
   a) Derecho a la integridad personal y a la vida, en relación con el deber del Estado garante de las personas privadas de su libertad.

IV. PROCEDIMIENTO ANTE LA COMISIÓN.

Con la finalidad de documentar las presuntas violaciones a derechos humanos, así como para determinar la existencia o no de responsabilidad, por parte de los servidores públicos señalados, este Organismo realizó entrevistas a las personas relacionadas con los hechos; se recabaron comparecencias de personal adscrito al Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo, Zacatecas, así como a elementos de la Policía de Investigación; se solicitaron informes a las autoridades señaladas como responsables, así como informes en vía de colaboración y se consultó certificado médico del agraviado.

V. PRUEBAS.

Con base en lo estipulado en los artículos 48 y 49 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, en relación con los numerales 150, 151, 152, 153 y 154 del Reglamento Interior de este Organismo, durante el procedimiento realizado por esta Institución se recabaron los elementos probatorios documentales, remitidos tanto por la parte

agraviada como por las autoridades señaladas como responsables, así como documentación, dictámenes e inspecciones necesarios para emitir la resolución correspondiente.

VI. SOBRE LOS DERECHOS VULNERADOS.

Violación al derecho a la integridad personal y a la vida, en relación con el deber del Estado garante.

A. De la posición del Estado, como garante de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.

1. Hablar de derechos humanos, equivale a afirmar que existen derechos fundamentales que las personas poseen por el hecho de serlo, por su propia naturaleza y dignidad; derechos que le son inherentes, y que, lejos de nacer de una concesión de la sociedad política, han de ser por ésta consagrados y garantizados.[1] Los derechos humanos aparecen pues, como un conjunto de facultades e instituciones que, en cada momento histórico, concretan las exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad humanas, las cuales deben ser reconocidas positivamente por los ordenamientos jurídicos a nivel nacional e internacional.[2] Además, debe agregarse que, la piedra angular de éstos, la constituye el principio de universalidad, el cual, ha sido reiterado en numerosos convenios, declaraciones y resoluciones de Organismos Internacionales de derechos humanos.

2. Por ejemplo, en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, celebrada en Viena, en 1993, los Estados acordaron que, con independencia de los sistemas políticos, económicos o culturales que adoptasen, tenían el ineludible deber de promover y proteger todos los derechos humanos y libertades fundamentales de sus gobernados. Motivo por el cual, es posible afirmar que, las personas que se encuentran privadas de su libertad conservan todos sus derechos humanos; desde luego, con excepción de aquellos que hayan sido restringidos temporalmente, por una disposición legal, o como consecuencia de su estado de reclusión.

3. Lo anterior, habida cuenta de que, el Estado, tiene una posición especial de garante respecto de las condiciones de reclusión de dichas personas y, por consiguiente, tiene la obligación de vigilar porque tales condiciones, sean compatibles con su dignidad humana. En ese sentido, es posible afirmar que, tal obligación, no se materializa con la mera provisión de servicios básicos, sino que debe hacerse patente mediante el establecimiento de recursos y la implementación de medidas que aseguren la tutela efectiva de los derechos humanos de las y los internos.

4. Relativo a ello, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha sintetizado la importancia de dicha obligación, bajo la siguiente premisa:

> *"La proclamación de derechos sin la provisión de garantías para hacerlos valer queda en el vacío. Se convierte en una formulación estéril, que siembra expectativas y produce frustraciones. Por ello es preciso establecer las garantías que permitan reclamar el reconocimiento de los derechos, recuperarlos cuando han sido desconocidos, restablecerlos si fueron vulnerados y ponerlos en práctica cuando su ejercicio tropieza con obstáculos indebidos". [3]*

5. Con base en lo anterior, el propio Tribunal Interamericano, ha reiterado en diversas ocasiones que, la mayoría de las muertes de personas privadas de su libertad, que suceden al interior de los centros penitenciarios de la región, guardan estrecha relación con las condiciones de violencia interna, resultante de la falta de prevención y atención oportuna de las autoridades penitenciarias. En tanto que, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias, ha señalado que, las autoridades mexicanas, no han abordado de manera adecuada el problema de autogobierno en los centros de reclusión, e incluso, se mantienen al margen del asunto, ya sea por temor o por complicidad[4].

---

1 TRUYOL y S., Antonio, *Los derechos humanos,* Tecnos, Madrid, 1979, pág. 6

2 PÉREZ L., Antonio, *Derechos humanos, Estado de Derecho y Constitución,* Tecnos, Madrid, 1984, pág. 84.

3 CIDH, *El acceso a la justicia como garantía de los derechos económicos, sociales y culturales. Estudio de los estándares fijados por el sistema interamericano de derechos humanos*, OE A/Ser.L/V/II .129 Doc. 4, cidh/oea, 7 de septiembre de 2007, párr. 183, disponible en: http://cidh.org/pdf%20files/acceso%20a%20la%justicia%desc.pdf

4 Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, *Propuesta General 1/2018, La ejecución penal desde los derechos humanos,* pág. 42.

6. Problemática que ha sido constantemente evidenciada por dichas instancias internacionales, y por la cual este Organismo Autónomo ha emitido diversas Recomendaciones, a saber: **06/2017, 02/2018, 03/2018, 06/2018, 16/2018, 18/2018, 21/2018, 05/2019, 08/2019,12/2019** y **15/2019**; así como **03/2020, 04/2020, 06/20 07/2020**, **11/2020, 16/2020, 19/2020**, y **05/2021**. En éstas, se ha demostrado una y otra vez que, en general, por parte de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas, subsiste la omisión de brindar una adecuada protección a la integridad personal y a la vida de las personas privadas de su libertad. Ello, ha desencadenado en muchas ocasiones, actos violentos que llevaron a la pérdida de vida de personas privadas de la libertad, a causa de agresiones cometidas por otros internos. Muertes en las que se causaron lesiones fueron infligidas con armas punzocortantes presuntamente fabricadas o ingresadas al interior de dichos centros penitenciarios; o bien, convergen circunstancias que han orillado de manera lamentable, a que los propios internos terminen con su vida.[5]

7. En esa lógica, recordando el derecho a la vida es aquel *"respecto del cual no se autoriza suspensión alguna, ni siquiera en situaciones excepcionales"*[6]; mientras que, el derecho a la integridad personal *"es aquél que tiene todo sujeto para no sufrir tratos que afecten su estructura corporal, sea física, fisiológica o psicológica, o cualquier otra alteración en el organismo que deje huella temporal o permanente, que cause dolor o sufrimiento grave con motivo de la injerencia o actividad dolosa o culposa de un tercero"*[7], puede concluirse que, desde la perspectiva de los derechos humanos, las personas internas deben recibir el mismo respeto a su dignidad humana que aquél que deben recibir las personas en libertad.

8. Por consiguiente, este Organismo Autónomo, tal como lo ha sustentado en los documentos recomendatorios precitados, y en correspondencia con la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, reitera una vez más que, **la reclusión no tiene que imponer mayores restricciones al disfrute de los derechos humanos que las que devienen de la propia privación de la libertad.** Motivo por el cual, la vida, e integridad moral, física, sexual y psicológica de todas las personas internas, deberá ser salvaguardada por la autoridad penitenciaria de forma reforzada. Garantizando, manteniendo y, en su caso, restableciendo el orden y la paz dentro de los establecimientos carcelarios, utilizando para ello los protocolos aplicables, y con apoyo de las herramientas, los mecanismos y el equipo necesarios disponibles para el cumplimiento de sus atribuciones.

9. De este modo, la intervención de esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas en el caso concreto, obedece a las obligaciones constitucionales que en ella recaen, así como al hecho de que la muerte del señor **VD†**, ocurrió dentro del Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo, Zacatecas, mientras se encontraba bajo la custodia del Estado. Aunado a ello, se suma el hecho de que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha sostenido que para determinar que se ha producido una violación al derecho a la vida, no se requiere determinar la culpabilidad de sus autores o su intencionalidad, y tampoco es preciso identificar individualmente a los agentes a quienes se atribuyen los hechos violatorios. Pues en todo caso, resulta suficiente demostrar que se han verificado acciones u omisiones, que hayan permitido la perpetración de esas violaciones, o que exista una obligación del Estado que haya sido incumplida.

10. Por lo tanto, con independencia de los resultados que arroje la investigación a cargo del **LIC. FRANCISCO ALEJANDRO SANDOVAL CARRILLO**, Agente del Ministerio Público, adscrito a la Unidad Especializada en Investigación Mixta número 6, del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas, una vez agotada la integración de la carpeta de investigación […], originada con motivo de los hechos en que perdió la vida el señor **VD†**, la intervención de este Organismo es posible, en virtud de la atribución de investigar las posibles violaciones a derechos humanos, atribuidas a autoridades estatales, ya sea que tales violaciones sean por acción o por omisión.

---

5 Específicamente, en los hechos que motivaron la Recomendación derivada del expediente CDHEZ/503/2018, se acreditó que, la víctima directa, perdió la vida por asfixia por ahorcamiento.

6 Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Observación General núm. 6. Derecho a la vida, HRI/GEN/1/ Rev.9, aprobada en el 16º periodo de sesiones, 30 de abril de 1982, párr. 1.

7 Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Recomendación 69/2016, de fecha 28 de diciembre de 2016.

11. Motivo por el cual, en el caso motivo de análisis, se procede primeramente a establecer la obligación del Estado, como garante de los derechos de las personas privadas de su libertad, para, enseguida, realizar el estudio minucioso del derecho a la vida y del derecho a la integridad personal, conculcados en perjuicio de **VD†**. Dicho, en otras palabras, toda vez que la muerte de **VD†**, puede representar por omisión, una vulneración a su derecho a la vida y a su integridad personal, su deceso se estima atribuible, indirectamente, al personal de seguridad y custodia del Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo, Zacatecas. Ello, en virtud de que, en su calidad de servidores públicos representantes del Estado, su obligación consiste en garantizar los derechos humanos de todas las personas internas bajo su custodia, incluido desde luego, el derecho a la vida, con base en los argumentos hasta aquí expuestos.

12. En ese entendido, debemos partir de qué significa el término "garante". Para ello, es dable decir que, la raíz etimológica de dicho término proviene del vocablo francés *"garant"* que, a su vez, viene de la palabra germánica *"Warren"*, que significa: *"hacerse responsable, asegurar"*. En términos legales, la figura del garante se configura por aquel que se compromete a responder por otra persona[8]. Persona con la obligación jurídica de garantizar un derecho a un titular[9]. Entonces pues, frente a las personas privadas de libertad, el Estado se encuentra en una posición especial, reforzada, de garante, toda vez que las autoridades […] ejercen un fuerte control o dominio, frente a las personas que se encuentran bajo su custodia[10].

13. Luego entonces, si retomamos el hecho de que el Estado, como responsable de los centros penitenciarios es el garante de los derechos de las personas bajo su custodia[11], se deduce que debe prevenir todas aquellas situaciones que, por acción directa u omisión, pudieran conducir a la supresión del derecho a la vida. Por ello, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha conminado a los Estados a proteger el derecho a la vida e integridad de las personas privadas de su libertad, tomando en consideración el constante riesgo de que puedan sufrir violaciones a sus derechos humanos, debido a la violencia carcelaria[12], misma que, conforme a los criterios del propio Tribunal Interamericano, es producida, entre otros factores, por la corrupción, el autogobierno, las disputas entre personas que viven en reclusión o bandas criminales, el consumo problemático de drogas y el hacinamiento[13].

14. Dichas circunstancias, precisan que el Estado asegure que sus agentes ejerzan un control adecuado de la seguridad y el orden en los centros penitenciarios. Sobre dicho tópico, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes, ha sostenido que el personal penitenciario, debe ver su trabajo como una vocación más que como una mera actividad de subsistencia. Pues si eso sucede, se generarán condiciones diferentes de interacción y disminuirán los incidentes de violencia. Inclusive, ha señalado que el profesionalismo del personal requiere que sean capaces de tratar con las personas privadas de la libertad de forma decente y humana, mientras pone atención a los asuntos de seguridad y orden[14].

15. Bajo esa lógica, es dable concluir que, cuando suceden muertes de personas privadas de su libertad y, que por ende se encuentran bajo su custodia, el Estado se encuentra obligado a prevenirlas y a responder por ellas[15]. En lo atinente, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias ha sostenido que, aunque la muerte no sea producida directamente por la acción del Estado, como en el caso sucedió, en principio de cuentas se presume su responsabilidad[16]. Esto, bajo la premisa que se le exige un nivel más elevado y reforzado de protección, debido a que estas personas se encuentran limitadas de la libertad y consecuentemente, en su capacidad de autoprotección, dependiendo para ello completamente de la autoridad penitenciaria[17].

---

8 Obtenido de: http://conceptodefinicion./d/

9 Obtenido de: http://popjuris.com/dicionario/definicion-de/garante/

10 Corte IDH, Caso *Instituto de Reeducación del Menor* Vs. Paraguay. Sentencia de 2 de septiembre de 2004 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), párr.152.

11 Corte IDH, *Personas privadas de libertad*, San José, Corte idh/danida (Cuadernillo de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, núm. 9), s. a., pág. 5.

12 Corte IDH, *Informe sobre los derechos humanos de las personas privadas de libertad en las Américas*, *doc. cit.*, párr. 270.

13 Corte IDH, *Asunto de las Penitenciarías de Mendoza respecto Argentina*, medidas provisionales, resolución del 18 de junio de 2005, p. 18, resolutivo 1.

14 Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes, *11 Informe general de actividades*, Consejo de Europa, CPT/Inf (2001) 16, párr. 26.

15 Asamblea General de las Naciones Unidas, *Ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias. Nota del Secretario General*, A/61/311, 5 de septiembre de 2006, párr. 50.

16 Ídem, párr. 53.

17 Corte IDH, *Informe sobre los derechos humanos de las personas privadas de libertad en las Américas*, *doc. cit.*, párr. 53.

16. En consecuencia, una vez que el deceso de una persona privada de la libertad ha ocurrido, el Estado debe actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar los actos que se sospeche que fueron cometidos por personas o entidades privadas.[18] Pues en caso contrario, podría incurrir en responsabilidad; lo cual, es imperativo en los casos de suicidios y homicidios ocurridos dentro de las cárceles y centros penitenciarios bajo su jurisdicción. Motivo por el cual, se insiste, la obligación de este Organismo, en la especie, consiste en investigar la responsabilidad de las autoridades involucradas, en la vulneración del derecho a la vida e integridad personal de **VD†**, interno que, en fecha 15 de mayo de 2019, perdió la vida en el área de Conductas Especiales del Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo, Zacatecas.

B. Del derecho a la vida.

17. En las Recomendaciones previamente enlistadas, esta Comisión, ha insistido en que, el derecho a la vida, ocupa un lugar primordial en la lista de los derechos fundamentales de toda persona[19]. A tal grado que, pese a que la Doctrina afirma que todos los derechos humanos tienen igual valor[20], a la hora de examinar casos concretos de violaciones de este derecho, los Organismos Internacionales y Regionales competentes, no ponen en tela de juicio, la necesidad de destacar el carácter especial del derecho a la vida.

18. Bajo esa lógica, el derecho a la vida se estima como prerrequisito para el disfrute de todos los demás derechos humanos.[21] Dicho, en otros términos, es un derecho fundamental, esencial, sin el cual resulta imposible el disfrute de otros derechos o libertades, pues éstos, carecerían de sentido ante la desaparición de la persona titular del derecho; por ello, el derecho a la vida, como inseparable de toda persona, involucra que nadie puede ser privado de la vida de forma arbitraria. Dicho derecho, se encuentra reconocido en diversos instrumentos internacionales y regionales, firmados y ratificados por el Estado Mexicano[22].

19. Al respecto, mediante su Observación General sobre el artículo 6, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Comité de Derechos Humanos, calificó al derecho a la vida como: *"el derecho supremo respecto del cual no se autoriza suspensión alguna, ni siquiera en situaciones que pongan en peligro la vida de la nación".*[23] Aunado a ello, en un caso relativo a la pena de muerte, analizado en 1993, el propio Comité, sostuvo lo siguiente:

> *"El punto de partida de un examen de esta cuestión debe ser la obligación el Estado parte (…) de garantizar los derechos reconocidos en el Pacto a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción. El derecho a la vida es el más esencial de estos derechos".*[24]

20. A partir de entonces, el Comité ha reiterado en sus resoluciones, de manera textual, que: *"El derecho a la vida es el más esencial de estos derechos"*[25]. Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, utilizando un lenguaje más sutil y cuidadoso en los casos en que ha abordado dicho tópico, sostuvo, en la Opinión Consultiva 16/99, que: "*Si el debido proceso legal, con su conjunto de derechos y garantías, debe ser respetado en cualesquiera circunstancias, su observancia es aún más importante cuando se halle en juego el supremo bien que reconocen y protegen todas las declaraciones y tratados de derechos humanos: la vida humana".*[26]

---

18 Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Observación General núm. 31. Naturaleza de la obligación jurídica general impuesta a los Estados Partes en el Pacto, CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, aprobada en el 80º periodo de sesiones, 29 de marzo de 2004, párr. 8.

19 Ver, por ejemplo, las Recomendaciones recaídas a los expedientes CDHEZ/325/2018, CDHEZ/454/2018 y CDHEZ/509/2018.

20 Ver, por ejemplo, el siguiente pasaje de la Declaración de Viena, adoptado por la segunda Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos, celebrada en Viena en 1993: *"Todos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes y están relacionados entre sí. La comunidad debe tratar los derechos humanos en forma global de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y dándoles a todos la misma importancia."* (párr. 5).

21 Corte IDH, *Caso Espinoza González* vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2014. Serie C. No. 289, párr. 205.

22 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, art. 133. "Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de las entidades federativas.

23 Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Observación General No. 6, párr. 1 (1982).

24 Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, *Caso Kindler* vs. Canadá, párr. 13.1 (énfasis agregado).

25 Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, *Caso A.R.J.* vs. Australia, párr. 6.8 (1997); G.T. c. Australia, párr. 8.1 (1998).

26 Corte IDH, Opinión Consultiva OC-16/99, párr. 135.

21. Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, también ha reconocido de manera enfática el carácter especial del derecho a la vida. En una decisión, adoptada en 1996, sostuvo lo siguiente:

> *"(…) la Comisión Interamericana de Derechos Humanos debe destacar (…) que el derecho a la vida entendido como un derecho fundamental de la persona humana consagrado en la Declaración Americana y en diversos instrumentos internacionales a escala regional y universal, tiene el estatus de jus-cogens."*[27]

22. Igualmente, la Comisión explicó que, el concepto de *juscogens*, "*se deriva de un orden superior de normas establecidas en tiempos antiguos y que no pueden ser contravenidas por las leyes del hombre o de las naciones."* [28] En adición a lo anterior, este Organismo destaca el hecho de que, en una decisión más reciente, la Comisión Interamericana precisó que: "*El derecho a la vida es ampliamente reconocido como el derecho supremo del ser humano y conditio sine qua non para el goce de todos los demás derechos."*[29]

23. El derecho a la vida, se encuentra reconocido en el ámbito universal, por el artículo 3° de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y por el numeral 6.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Instrumentos que establecen de forma genérica que toda persona tiene derecho a la vida, sin condicionar este derecho a si la persona se encuentra o no privada de su libertad. De manera adicional, el Comité de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, resolvió, a través de la Observación General número 6, que el derecho a la vida es un derecho supremo respecto del cual, no se autoriza suspensión alguna. Dado su carácter inviolable, el derecho a la vida forma parte del *iuscogens*[30] y conforma un núcleo inderogable, al encontrarse consagrado como uno de los derechos que no admiten suspensión en casos de guerra, peligro público u otras amenazas a la independencia o seguridad de los Estados[31].

24. Por otra parte, en el contexto regional, el derecho a la vida se encuentra previsto en el artículo 1°, de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, así como en el artículo 4°, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en términos similares a los señalados en el párrafo anterior. Adicionalmente, los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, establecen que, el respeto al derecho a la protección de la vida, no puede ser objeto de suspensión alguna.

25. Análogamente, en el marco jurídico interno, el derecho a la vida se encuentra consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyas normas se encaminan a reconocer la conservación y la protección de la vida humana. Lo cual, ha sido sustentado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tras el análisis integral y extensivo de lo estipulado por los artículos 1°, 14 y 22 constitucionales, de los cuales, sostuvo nuestro Máximo Tribunal, se desprende la protección de este derecho[32].

26. En esa tónica, es factible concluir que, las obligaciones del Estado, respecto de la garantía del respeto a la vida, se clasifican de la siguiente manera:

> a) Negativas: implican una abstención, un "no hacer" o una no intervención y,
> b) Positivas: requieren de un "hacer" por parte del Estado; esto es, de la adopción e implementación de medidas, a través de sus diversas instituciones y agentes, para su debido cumplimiento; es decir, para proteger y preservar la vida, garantizando el pleno y libre ejercicio de los derechos de todas las personas bajo su jurisdicción.[33]

27. De este modo, en lo que atañe al derecho a la vida, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al pronunciarse sobre su garantía, ha sostenido que:

> *"…no solo presupone que ninguna persona sea privada de su vida arbitrariamente (obligación negativa), sino que además requiere, a la luz de su obligación de*

---

27 Oficina en México, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Escuela de Graduados en Administración Pública y Política Pública, México, D.F., septiembre de 2007, pág. 100.

28 Corte IDH, *Caso Remolcadora* 13 de marzo, párr. 79 (1996). Ver también Sequieras Mangas c. Nicaragua, párr. 145. (1997). La CIDH hace una exégesis de la relación y las diferencias entre los conceptos de derecho consuetudinario y de *jus cogens* en los párrafos 43 a 50 de su decisión en el C*aso Domínguez* vs. Estados Unidos (2002).

29 Corte IDH, *Caso Edwards* y otros vs. Bahamas, párr. 109 (2001).

30 Corte IDH. Informe No. 47/96, Caso 11.436: Caso *Víctimas del Barco Remolcador "13 de marzo"* vs Cuba, 16 de octubre de 1996, párr.79.

31 Corte IDH. *Caso Galdeón García* vs Perú. Sentencia de 6 de abril de 2006. Serie C. No.147, párr. 32.

32 Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tesis jurisprudencial 13/2002: DERECHO A LA VIDA, SU PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Febrero de 2002, pág. 589.

33 Corte IDH. Caso Myma Mack Chang vs. Guatemala. Fondo. Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2003, párr.153.

> *garantizar el pleno y libre ejercicio de los derechos humanos, que los Estados adopten todas las medidas apropiadas para proteger y preservar el derecho a la vida (obligación positiva), de quienes se encuentren bajo su jurisdicción. Esta protección activa del derecho a la vida por parte del Estado no solo involucra a sus legisladores, sino a toda institución estatal y a quienes deben resguardar la seguridad, sean éstas, fuerzas de policía o sus fuerzas armadas"*[34].

28. En ese entendido, este Organismo considera que, cuando existe una omisión de salvaguardar la vida de personas detenidas bajo la custodia del Estado, por falta de vigilancia de las autoridades penitenciarias, se actualiza el incumplimiento de su deber reforzado de cuidado, en su calidad de garante. Es decir, en lo que concierne al derecho a la vida de las personas privadas de su libertad, el Estado se encuentra en una posición especial de garante, motivo por el cual, su obligación de salvaguardar este derecho es aún mayor. Por lo tanto, debe asegurarse de proporcionar condiciones mínimas que sean compatibles con el respeto a la dignidad humana. Consecuentemente, el Estado tiene el deber de prevenir todas aquellas situaciones que pudieran conducir, por acción o por omisión, a la supresión de dicho derecho. [35]

29. En cuanto al deber del Estado, como garante de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad, este Organismo considera oportuno puntualizar que, la jurisprudencia universal e interamericana, también reconoce la **responsabilidad del Estado por omisión** debido a la desprotección de los presos y a la inatención a sus necesidades básicas. Una de las primeras decisiones al respecto, ampliamente citada en la jurisprudencia posterior, es la emitida por el Comité de Derechos Humanos en el caso Dermit vs. Uruguay.

30. En dicho caso, luego de 8 años de prisión, y cuando estaba a punto de obtener su libertad para establecer su residencia en un país de asilo, la víctima murió repentinamente en su celda. El Estado alegó suicidio y proporcionó al Comité una copia de la autopsia, pero no explicó las circunstancias de la muerte, las cuales, por lo visto, no fueron objeto de una investigación. El denunciante, un pariente de la víctima, presentó evidencias de que la hipótesis de suicidio era inverosímil. El Comité consideró al Estado responsable por la muerte, independientemente de que hubiera sido homicidio o suicidio, justificando su decisión de la siguiente manera:

> *"(…) si bien el Comité no puede llegar a una conclusión definitiva sobre si Hugo Dermit cometió suicidio, fue impulsado a cometerlo o fue muerto de otro modo mientras estaba encarcelado,* ***la conclusión ineludible es que, en cualquier circunstancia, las autoridades uruguayas fueron responsables, por acción u omisión, de no haber adoptado medidas adecuadas para proteger su vida*** *conforme exige el párrafo 1 del artículo 6 del Pacto".*[36]

Las negritas, son de esta Comisión.

31. Con base en lo hasta aquí argumentado, es posible advertir que, el Estado, estará obligado a rendir cuentas del tratamiento dado a la persona que falleció bajo su custodia[37]. Ya que, cuando una persona es detenida en un estado óptimo de salud, o en condiciones que no impliquen un riesgo inminente a su vida y, con posterioridad muere por causas distintas, incluyendo el suicidio o el descuido de la persona a la que se encomendó su vigilancia, recae en el Estado, el deber de brindar una respuesta satisfactoria y convincente de lo acontecido. Y, en su caso, desvirtuar las alegaciones sobre su responsabilidad, mediante medios de convicción válidos; tomando en cuenta que existe una presunción de responsabilidad estatal sobre lo que ocurra a una persona bajo custodia del Estado.

32. Se concluye entonces que, según lo disponen los ordenamientos jurídicos antedichos, el Estado, en su posición de garante de los derechos fundamentales de sus gobernados, está obligado a adoptar las medidas necesarias para proteger y garantizar el derecho a la vida de las personas que se encuentran recluidas en algún centro de detención. Pues no debe soslayarse el hecho de que, la muerte de personas privadas de libertad en centros de reclusión

---

34 Corte IDH. *Caso Vargas Areco* vs. Paraguay. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C. No. 155 párr. 75..

35 Corte IDH. Informe sobre los derechos humanos de las personas privadas de libertad en las Américas. OEA, aprobado por la Corte IDH, el 31 de diciembre de 2011, párr. 270.

36 Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, *Caso Dermit* vs. Uruguay, párr. 9.2.

37 Corte IDH. Informe sobre los derechos humanos de las personas privadas de libertad en las Américas. OEA, aprobado por la CIDH, el 31 de diciembre de 2011, párr. 270: Corte IDH. Caso Cárcel de Urso Branco respecto Brasil. Medidas Provisionales. Resolución del 18 de junio de 2002, Considerando 8; European Court of Human Rigths. Case of Salman v Turkey. Application 21986//93. Judgment of june 27, 2000. Grand Chamber.

o espacios de detención temporal, es consecuencia de la falta de prevención y adopción de las medidas adecuadas para mitigar una situación de riesgo o amenaza. Motivo por el cual, deberán implementarse las acciones preventivas necesarias para evitar que, por acción u omisión, se suprima este derecho.

33. Con relación a tales medidas, el Tribunal Interamericano ha determinado que, para proteger y garantizar el derecho a la vida de las personas privadas de la libertad, éstas abarcan desde aquéllas que favorecen la conservación de un clima de respeto a los derechos humanos, hasta aquellas dirigidas a proteger a los internos de la violencia que pueda suscitarse entre ellos. Pues dichos actos de violencia representan una situación de riesgo inminente tanto para la vida de las personas recluidas, como para la de cualquier persona que se encuentre en dichos establecimientos. Por lo tanto, el Estado debe tener la capacidad de mantener el orden y la seguridad al interior de los centros penitenciarios y así, garantizar la seguridad de las y los internos en todo momento, así como de las personas que los visitan y de las propias que laboran en ellos.

34. En coincidencia con lo anterior, en el contexto interno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ha pronunciado sobre el deber del Estado como garante de los derechos de las personas privadas de su libertad, y ha sostenido que*: "además de la prohibición a la privación de la vida, el Estado tiene la obligación en el ámbito legislativo, judicial y administrativo de adoptar medidas positivas para preservar la existencia, por lo que se considera transgresión al derecho a la vida no sólo cuando una persona es privada de ésta, sino también cuando se omite adoptar las medidas aludidas para preservarla o para minimizar el riesgo de que la pierda a manos del Estado o de otros particulares*.[38]

35. Bajo ese entendido, se advierte que las autoridades estatales, están obligadas a realizar todas aquellas acciones necesarias para garantizar y preservar la vida de las personas bajo su control, cuidado y custodia. Por tanto, el Estado se encuentra compelido a prevenir de manera razonable aquellas situaciones de riesgo que pudieran conducir, aún por omisión, a la supresión de la inviolabilidad del derecho a la vida; ya sea por otros particulares o por servidores públicos.

C. Del derecho a la integridad personal.

36. En las Recomendaciones previamente aludidas, esta Comisión Estatal ha indicado que asume como suyo, el criterio sustentado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el sentido de que, el derecho a la integridad personal, es aquél que tiene todo sujeto para no sufrir tratos que afecten su estructura corporal, sea física, fisiológica o psicológica, o cualquier otra alteración en el organismo que deje huella temporal o permanente, que cause dolor o sufrimiento grave con motivo de la injerencia o actividad dolosa o culposa de un tercero. Dicho criterio, fue asumido por el Organismo Nacional, mediante el contenido de la Recomendación 69/2016, de fecha 28 de diciembre de 2016 y es compartido por este Organismo Autónomo, debido a que abarca aspectos relacionados con el derecho a la integridad y a la dignidad de la persona.

37. En virtud de ello, es oportuno resaltar que, a pesar de que ni la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ni la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, o el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconocen expresamente el derecho a la integridad personal como tal; es evidente que la integridad personal es el bien jurídico cuya protección constituye el fin y objetivo principal de la prohibición de tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanas o degradantes, previstas en el artículo 5, de la Declaración Universal y 7 del Pacto. Por lo tanto, si relacionamos las disposiciones anteriores, con el contenido del artículo 3°, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que establece que, todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona; se puede inferir que, de dicho precepto, se desprende que la obligación de velar por el respeto y garantía de los derechos humanos corresponde al Estado, como ente garante de éstos.

38. De su lado, la Declaración Americana de Derechos Humanos, no sólo carece de una disposición que reconozca el derecho a la integridad personal, sino que también adolece de

---

38 Tesis aislada P. LXI/2010, Derecho a la vida. Supuestos en que se actualizará su transgresión por parte del Estado. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época, t. XXXIII, enero 2011, pág. 24.

una prohibición expresa de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. No obstante, como ya se indicó en líneas precedentes, su primer artículo consagra el derecho de toda persona a la vida, la libertad y a la seguridad de su persona. Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que el concepto de seguridad personal comprende la integridad personal, a guisa de ejemplo, conviene citar el siguiente razonamiento:

> *"(…) que la tortura física o moral no se justifica en modo alguno, por ser atentatoria contra la dignidad humana y viola la integridad de la persona, cuya defensa está consagrada en el artículo 1 de la Declaración Americana".*[39]

39. En tanto que, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sí consagra expresamente el derecho a la integridad personal y hace un aporte valioso a la definición de su contenido, al precisar que comprende la integridad física, psíquica y moral, mediante el texto del artículo 5.1. Aunado a ello, el derecho a la integridad, la prohibición de tortura y los derechos de los reclusos a un trato digno y humano están plasmados en distintos párrafos del artículo 5 de la mencionada Convención. Y, como resultado de lo anterior, mediante el precepto 1.1 dicho instrumento compromete a los Estados a asumir el compromiso de respetar los derechos y libertades reconocidos en ella, así como de garantizar su libre y pleno ejercicio, a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna.

40. Dichas obligaciones generales de respeto y garantía de los derechos humanos, vinculantes para el Estado con respecto a toda persona, implican para éste un mayor nivel de compromiso al tratarse de personas en situación de riesgo o vulnerabilidad.[40]Tan es así que, aunado a las normas que tutelan la integridad de toda persona, la normativa internacional establece otras que tienen el objetivo de proteger la integridad de las personas privadas de libertad. De esta manera, el párrafo 2 del artículo XXV de la Declaración Americana, el párrafo 1 del artículo 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el párrafo 2 del artículo 5 de la Convención Americana consagran el derecho genérico a un trato humano, lo que se traduce un trato respetuoso de la dignidad de la persona humana. Los dos tratados también contienen normas más específicas relativas al trato de distintas categorías de reclusos, en particular la separación de reclusos según su condición jurídica, sexo y edad, y la rehabilitación de reos condenados.

41. Lo anterior, significa que, mientras que el derecho genérico a un trato humano es reconocido en cuanto derecho de toda persona privada de libertad, las demás disposiciones sobre el trato de reclusos son derechos propios de personas privadas de libertad por motivos de índole penal. En lo atinente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos al resolver el caso "Loayza Tamayo", citó una sentencia de la Corte Europea, y manifestó su acuerdo con la conclusión de dicho Tribunal, consistente en que:

> *"La infracción del derecho a la integridad física y psíquica de las personas es una clase de violación que tiene diversas connotaciones de grado y que abarca desde la tortura hasta otro tipo de vejámenes o tratos crueles, inhumanos o degradantes cuyas secuelas físicas y psíquicas varían de intensidad según los factores endógenos y exógenos que deberán ser demostrados en cada situación concreta."* [41]

42. En ese orden de ideas, es dable señalar que, el derecho de las personas privadas de libertad a ser tratadas humanamente y con el debido respeto a la dignidad inherente a su persona, constituye el derecho cuya alegada violación origina más denuncias. En cuanto a ello, en 1992 el Comité de Derechos Humanos, adoptó una nueva Observación General sobre el artículo 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y destacó que el derecho a un trato digno y humano, no se limita a los presos, sino que se extiende a toda persona privada de libertad *"en virtud de las leyes y la autoridad del Estado"*[42]. Aunado a ello, el Comité sostuvo que el derecho a un trato digno y humano es un añadido a los demás derechos fundamentales de la persona, los cuales deben reconocerse y respetarse en la medida en que los requisitos legítimos de la privación de libertad lo permiten; motivo por el cual *"las personas*

---

39 CIDH, *Diez años de actividades*, pp. 337. Véase también el informe de la CIDH sobre la situación de los solicitantes de asilo en Canadá, infra.

40 CIDH, Informe sobre los derechos humanos de las personas privadas de libertad en la Américas, párr. 46.

41 Corte IDH, *Caso Loayza Tamayo*, párr. 57.

42 Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Observación General No. 21, que sustituy la No. 9 de 1982.

privadas de libertad gozan de todos los derechos enunciados en el Pacto sin perjuicio de las restricciones inevitables en condiciones de reclusión." [43]

43. Por otro lado, resulta de crucial importancia, el criterio sustentado por el citado Comité, en el párrafo cuarto de la referida Observación General, en los términos siguientes:

> *"Tratar a toda persona privada de libertad con humanidad y respeto de su dignidad es una norma fundamental de aplicación universal. Por ello, tal norma, como mínimo, no puede depender de los recursos materiales disponibles en el Estado Parte. Esta norma debe aplicarse sin distinción de ningún género (…)".*[44]

44. Asimismo, también en el ámbito universal, es destacable el criterio asumido por la Comisión de Expertos, de la Organización Mundial del Trabajo que, con relación a los derechos de las personas privadas de libertad, ha sostenido lo siguiente:

> *"Es evidente que, el hecho de que hayan sido condenados por delitos no significa que los reclusos han de ser privados de derechos que se garantizan a todos (…)".*[45]

45. De su lado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en coincidencia con el Comité, mediante su decisión en el caso Edwards, consideró responsable al Estado no sólo del derecho de los presos a un trato humano, sino también del derecho de toda persona a la salud, consagrado por el artículo XI de la Declaración Americana de Derechos Humanos.[46] Dicho principio, ha sido reiterado y ampliado por la propia Comisión en decisiones recientes, mediante las cuales ha sustentado que: "*las normas mínimas establecidas en conformidad con los artículos [sic] 5(1) y 5(2) de la Convención (…) se aplican sin tener en cuenta la naturaleza del comportamiento por el cual la persona en cuestión ha sido encarcelada independientemente del nivel de desarrollo del Estado (…)".*[47] Además, la Comisión también destacó la importancia del derecho a la integridad, al resolver el caso Támez contra Brasil, y sostuvo que el derecho a la integridad y al trato digno, es uno de los más importantes predicados de la responsabilidad internacional de los Estados en relación con los derechos humanos el velar por la vida y la integridad física y mental de las personas bajo su custodia.

46. Tanto es el estado de vulnerabilidad e institucionalización en el que se ven colocadas las personas privadas de libertad, que los Estados han propiciado la elaboración de un número importante de instrumentos normativos para la salvaguarda específica de sus derechos fundamentales, siendo los más relevantes: las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos de 1955 (Reglas Nelson Mandela), el Conjunto de Principios para la Protección de todas las Personas Sometidas a Cualquier forma de Detención o Prisión de 1988, los Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos de 1990, la Declaración de Arusha sobre Buenas Prácticas Penitenciarias, y las Reglas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de las Reclusas y Medidas No Privativas de la Libertad para las Mujeres Delincuentes (Reglas de Bangkok), entre otras.

47. En lo que incumbe al derecho a la integridad, las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos (Nelson Mandela), el Conjunto de Principios para la Protección de todas las Personas Sometidas a Cualquier forma de Detención o Prisión y los Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos, establecen en forma genérica que, cualquier persona privada de la libertad, ya sea que se encuentre detenida, arrestada o compurgando una pena de prisión, será tratada con pleno respeto a la dignidad humana. Además, las Reglas Mandela, estipulan de manera precisa que, ningún recluso será sometido a tortura ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, además de que se velará en todo momento por la seguridad de éstos y del personal, los proveedores de servicios y los visitantes. Finalmente, en la Declaración de Arusha, sobre Buenas Prácticas Penitenciarias, se ordena respetar y proteger los derechos y la dignidad de los reclusos y garantizar el cumplimiento de las normas nacionales e internacionales que salvaguardan sus derechos fundamentales.

---

43 Ídem.

44 Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Observación General No. 21. Este principio ha sido reafirmado y aplicado por el Comité en su dictamen en el *Caso Mukunto* vs. Zambia, párr. 6.4 (1999).

45 Organización Internacional del Trabajo (OIT), Informe de Comisión de Expertos, 2001, párr. 145.

46 Corte IDH, *Caso Edwards y otros* vs. Barbados, párr. 194 (2001).

47 Corte IDH, *Caso Knights y otros* vs. Jamaica, párr. 126 (citando las decisiones de la Corte Europea en el caso Ahmed c. Australia y del Comité de Derechos Humanos en Mukong c. Camerún). Ver también Edwards c. Barbados, párr. 194.

48. Sucesivamente, el Conjunto de Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, reconocen que todas las personas privadas de su libertad que estén sujetas a la jurisdicción de un Estado deberán ser tratadas humanamente, con absoluto respeto a su dignidad personal, derechos y garantías fundamentales. De manera adicional, dicho instrumento establece la obligación del Estado consistente en proteger a éstas contra todo tipo de amenazas, actos o conductas que tengan como finalidad anular la personalidad o disminuir la capacidad física o mental de la persona.[48]

49. Luego entonces, con relación a la obligación del Estado como garante de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad, éste es el sujeto obligado a proteger el derecho a la vida y a la integridad personal, por lo que al ser también responsable de los establecimientos de detención, es el garante de estos derechos de los detenidos.[49] Tan es así que, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha sostenido de manera reiterada que, de las obligaciones generales de respetar y garantizar los derechos, derivan deberes especiales, determinables en función de las particulares necesidades de protección del sujeto de derecho, ya sea por su condición personal o por la situación específica en que se encuentre.[50]

50. A la par, la Corte ha sustentado el criterio de que, frente a las personas privadas de su libertad, el Estado se encuentra en una posición especial y reforzada de cuidado, toda vez que las autoridades penitenciarias, ejercen un fuerte control o dominio sobre las personas que se encuentran sujetas a su custodia. De este modo, se produce una relación e interacción especial de sujeción entre la persona privada de libertad y el Estado, caracterizada por la privativa intensidad con que el Estado puede regular sus derechos y obligaciones y por las circunstancias propias del encierro, en donde al recluso se le impide satisfacer por cuenta propia una serie de necesidades básicas que son esenciales para el desarrollo de una vida digna.[51]

51. Bajo esa tesitura, este Organismo Autónomo concluye que, cuando el Estado priva de la libertad a una persona, asume una responsabilidad especial relacionada con el respeto y la garantía de sus derechos; ya que, tanto la seguridad como la integridad de éstas, queda bajo su custodia. Por ello, uno de los principales deberes del Estado consiste en ejercer un control efectivo sobre la seguridad interna de los centros penales a su cargo, pues en la medida en que sea capaz de garantizar dicho aspecto, podrá garantizar los derechos humanos de las y los reclusos.[52] Por lo tanto, si el Estado es incapaz de mantener el orden y la seguridad al interior de los centros penales, será incapaz de cumplir con el objetivo esencial de la pena privativa de libertad: la reforma y la readaptación social de las y los internos.

52. Con relación a ello, la Corte Interamericana ha reiterado en múltiples ocasiones que, toda restricción a los derechos humanos de las personas privadas de su libertad debe demostrar de forma fehaciente la necesidad de ésta y regular rigurosamente la limitación de que será objeto. Y, por consiguiente, ha establecido que existen derechos como la vida, la integridad, el debido proceso, entre otros, cuya limitación o restricción se encuentra proscrita, bajo el entendido de que, toda persona privada de su libertad tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con la dignidad inherente al ser humano y, por ende, el Estado debe garantizarle el derecho a la vida y a la integridad personal. Lo anterior, hace factible concluir que, el Estado, como responsable de los establecimientos de detención, es el garante de tales derechos en favor de las personas detenidas.[53]

53. Entonces pues, la privación de la libertad de una persona, cuando ha cometido un delito, tiene como único objetivo, reeducarla y reinsertarla socialmente. Motivo por el cual, el Estado debe cumplir una serie de obligaciones relacionadas con su efectiva protección, a fin de que se cumplan dichos objetivos, sin que se vulneren los demás derechos humanos que éstas poseen, sobre todo, aquellos relacionados con la salvaguarda de su vida e integridad,

---

48 Principio 1 del Conjunto de Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de la Libertad en las Américas.

49 Corte IDH, *Caso Neira Alegría y otros* vs. Perú, Sentencia de 19 de enero de 1995, párr. 60.

50 Corte IDH, *Caso Vélez Loor* vs. Panamá, Sentencia de 23 de noviembre de 2010 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), párr. 98

51 Ídem, párr.152.

52 Ídem, págs. 3-6.

53 Corte IDH, *Caso Neira Alegría* y otros vs. Perú, Sentencia de 29 de enero de 1995, Serie C No. 20, párr. 60.

concluyéndose entonces que, éste, tiene la obligación de protegerlos contra actos de violencia provenientes tanto de sus propios servidores, como de los demás reos.

54. En lo atinente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se ha pronunciado sobre la necesidad de que los Estados ejerzan un control efectivo de los centros penitenciarios, a fin de garantizar en todo momento la seguridad de las y los internos, sus familiares y de los propios trabajadores que ahí laboran; puesto que, de lo contrario, se generarían situaciones de riesgo, no sólo para la integridad, sino para la propia vida de las personas que se encuentran privadas de su libertad; contraviniéndose así una de las principales obligaciones en materia de derechos humanos: su garantía. Lo cual, además, se traduciría en la imposibilidad de que las penas privativas cumplan con su objetivo de reeducación y reinserción social.

55. Adicionalmente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha señalado que la violencia carcelaria es uno de los problemas más graves que enfrentan los sistemas penitenciarios de América Latina, y comprende tanto las agresiones de los agentes del Estado contra las personas privadas de su libertad, como los actos de violencia entre internos, o de éstos contra los agentes del Estado o contra terceras personas.[54] Situación que sólo puede ser prevenida mediante la implementación de acciones concretas que, por un lado, corrijan las deficiencias que permiten el rearme de la población penitenciara y, por el otro, permitan abastecer a los centros penitenciarios de personal capacitado y en número suficiente, para asegurar el adecuado y efectivo control.

56. En el caso particular del Estado Mexicano, a partir de la reforma constitucional del año 2011, mediante el texto del artículo 1°, párrafos, primero y tercero, de la Constitución General de la República, se definió claramente la obligación del Estado garante, respecto de la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos, al indicar que *"todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece."*[55] Consecuentemente, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Por consiguiente, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.[56]

57. Así pues, en el marco constitucional interno, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contempla que el respeto a los derechos humanos es un pilar fundamental de nuestro sistema normativo, lo cual, desde luego abarca al sistema penitenciario, cuya finalidad es la reeducación y reinserción social de los condenados, con base en el trabajo, la educación, la salud y el deporte.[57] Así lo establece de manera particular, el texto del artículo 18, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al estipular que, dicho sistema, deberá estar organizado primordialmente, sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para éste, la educación, la salud y el deporte, factores que son considerados como medios idóneos para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley.[58] Por lo tanto, se puede concluir que, el Estado es el garante de la seguridad de quienes se encuentren bajo su custodia en los centros penitenciarios del país.[59]

58. En adición a lo anterior, es importante recalcar que, tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales, como la Ley Nacional de Ejecución Penal, establecen que todas las personas privadas de su libertad, gozarán de todos los derechos previstos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Así, según lo dispone el artículo 9 del ordenamiento legal invocado,

---

54 CIDH supra nota 1, pág. 38.

55 Ídem, art.1°.

56 Ídem.

57 Ídem, art. 18.

58 Ídem.

59 Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Recomendación 04/2016 de fecha 25 de febrero de 2017, párr. 29.

cualquier persona que se encuentre privada de su libertad en un centro penitenciario mexicano, ya sea que compurgue una pena privativa de libertad, o que se encuentre bajo medida cautelar de prisión preventiva, gozará de todos los derechos previstos por la propia Constitución y los tratados internacionales signados por México, siempre y cuando, éstos no hubieren sido restringidos por la resolución o la sentencia, o su ejercicio fuese incompatible con el objeto de éstas. Por lo tanto, debe entenderse que, toda persona privada de su libertad tiene derecho a que se garantice su integridad moral, física, sexual, psicológica y, por ende, su vida, en condiciones de dignidad. [60]

59. Bajo ese entendido, conforme a lo dispuesto por los artículos 14, 15 fracción I; 19, fracción II y 20, fracciones V y VII de la Ley Nacional de Ejecución Penal, el Estado, a través de la autoridad penitenciaria, organizará la administración y operación del sistema penitenciario, sobre las mismas bases que prevé el señalado artículo 18, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo tanto, la autoridad penitenciaria tiene la ineludible obligación de supervisar que, en las instalaciones de los centros, se mantenga la seguridad, tranquilidad e integridad de las personas privadas de su libertad, del personal que ahí labora y de los visitantes, ejerciendo las medidas y acciones pertinentes para el buen funcionamiento de éstas.

60. Entonces pues, una de las funciones primordiales del Estado, será garantizar el respeto a los derechos humanos de todas las personas que se encuentren sujetas al régimen de custodia y vigilancia en un centro penitenciario[61]. Consecuentemente, la custodia penitenciaria será una atribución de la autoridad penitenciaria consistente en salvaguardar la vida, la integridad, la seguridad y los derechos de las personas privadas de la libertad, visitantes y personal adscrito a los centros penitenciarios y las demás instalaciones que determinen las disposiciones aplicables; así como hacer cumplir su normatividad[62]. Así como también, deberá preservar el orden y tranquilidad en el interior de los centros, evitando cualquier incidente o contingencia que ponga en riesgo la integridad física de las personas privadas de su libertad, visitas y personal de los mismos. Bajo esa premisa, se advierte que, el Estado, tiene la obligación de salvaguardar los derechos de las personas privadas de su libertad, sin perjuicio de las restricciones inevitables asociadas a las condiciones de reclusión; pues, al encontrarse éstas bajo su resguardo, no hay ni puede haber ninguna razón para que éste, se sustraiga de su deber perentorio de tutelar la vida e integridad de las personas que se hallan sujetas a su control, y que carecen por sí mismas, de capacidad efectiva de autodeterminación y defensa.

61. Respecto a este tema, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que, la responsabilidad del Estado, respecto a garantizar el derecho a la integridad de las personas privadas de su libertad, no se circunscribe a la obligación negativa de abstenerse de infligirles un daño; ya que, al tener éste el control sobre la vida de las y los reclusos, sus obligaciones se amplían e incluyen establecer medidas de seguridad y control necesarias para preservar la vida e integridad personal de las personas privadas de su libertad[63]. De ahí, que el Estado deba adoptar las medidas necesarias para prevenir que las personas privadas de su libertad sean atacadas por otros reclusos, por las autoridades del centro, e, inclusive por ellos mismos. Por lo cual, dichos centros deben contar con vigilancia constante y adecuada para mantener la seguridad y el control de internos.

62. Además de lo anterior, en el Caso Tibi vs. Ecuador, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que, el Estado tiene además el deber de investigar, sancionar y reparar toda violación a este derecho cometido en perjuicio de las personas que se encuentran bajo su custodia. Por lo cual, debe de iniciar de oficio y de manera inmediata una investigación efectiva que permita identificar, juzgar y sancionar a los responsables de dichas agresiones. Por consiguiente, *“el Estado es responsable de la observancia del derecho a la vida de toda persona bajo su custodia, precisamente en su condición de garante de los derechos consagrados en la Convención Americana; ya que, como lo ha señalado este Tribunal, si bien el Estado tiene el derecho y la obligación de garantizar su seguridad y mantener el orden público, su poder no es ilimitado, pues tiene el deber, en todo momento, de aplicar*

---

60 Ley Nacional de Ejecución Penal, http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LNEP.pdf.

61 Ídem.

62 Ídem.

63 Corte IDH, supra nota 1, pág. 134.

procedimientos conformes a Derecho y respetuosos de los derechos fundamentales, a todo individuo que se encuentre bajo su jurisdicción".[64]

63. En conclusión, este Organismo estima pertinente destacar que el Estado, como garante de los derechos fundamentales de los gobernados, tiene la obligación de prevenir aquellas situaciones que pudieran conducir, incluso por acción u omisión, a la supresión de la inviolabilidad del derecho a la vida y a la integridad personal. Lo anterior implica que, si una persona es detenida en buen estado de salud y posteriormente, muere, recae en el Estado la obligación de proveer una explicación satisfactoria y convincente de lo sucedido y desvirtuar las alegaciones sobre su responsabilidad, mediante elementos probatorios válidos, pues en su posición de garante, el Estado tiene tanto la responsabilidad de garantizar los derechos del individuo bajo su custodia, como la de proveer la información y las pruebas relacionadas con el destino que ha tenido la persona detenida.[65]

64. Bajo ese contexto, esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, hace patente una vez más su preocupación, por el hecho de que, desde el año 2016, se hayan presentado una serie de eventos violentos en los que, de manera lamentable, se han perdido vidas humanas; o bien, se ha dañado la integridad personal de los internos. Lo cual, ha acontecido en el Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas y en el de Fresnillo, al igual que en el caso que ahora nos ocupa. De modo tal que, en el informe de actividades 2020 de este Organismo, se puede verificar que, en 2016, se documentó un total de 16 incidentes, teniendo como resultado 10 internos lesionados y 6 fallecidos, en los 2 establecimientos penitenciarios. Mientras que, en 2017, tanto en el caso del Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas, como en el del Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo, Zacatecas, las cifras fueron las mismas; es decir, 10 internos resultaron lesionados y 6 perdieron la vida.

65. Aunado a ello, en el año 2018, en el Centro Regional de Reinserción Social de Cieneguillas, Zacatecas, se suscitaron 31 incidentes, mismos que trajeron como consecuencia 20 internos lesionados y 11 fallecidos. En tanto que, en el caso del Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo, Zacatecas, perdieron la vida 4 personas privadas de su libertad. En 2019, en el Centro Regional de Reinserción Social de Cieneguillas, Zacatecas, acontecieron 2 eventos de riña que trajeron como consecuencia la muerte de 16 internos y 6 lesionados. En tanto que, en el centro penitenciario de Fresnillo, se dieron 2 riñas que acarrearon como consecuencia 3 personas internas lesionadas. Además de ello, en el mismo periodo, la autoridad reportó 1 suicidio en cada establecimiento y 1 homicidio más en el caso de Fresnillo.

66. Este Organismo hace énfasis en la gravedad de la situación que atraviesa el Sistema Penitenciario en esta Entidad Federativa; ya que, pese a que como ya se apuntó, se han emitido las Recomendaciones **06/2017, 02/2018, 03/2018, 06/2018, 16/2018, 18/2018, 21/2018, 05/2019, 08/2019,12/2019** y **15/2019**; así como **03/2020, 04/2020, 06/20 07/2020**, **11/2020, 16/2020, 19/2020**, y **05/2021**, no se han tomado medidas para abatir las condiciones que, en dichos casos, han propiciado la pérdida de vidas humanas, o el daño a la integridad de los internos. Contrario a ello, la situación ha empeorado de manera gravísima; tal y como se puede corroborar en el informe de actividades aludido. De éste, se desprende que, en 2020, solo en el Centro Regional de Reinserción Social de Cieneguillas, Zacatecas, se suscitaron 4 riñas, que devinieron en un total de 2 internos muertos y 17 lesionados; además de ello, la autoridad reportó 1 interno lesionado de manera dolosa y otro más en una tentativa de homicidio. A ello, se sumaron dos muertes por suicidio y 12 reos más lesionados, en un evento de fuga registrado en el mismo ejercicio 2020. Finalmente, en el caso del Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo, Zacatecas, se documentaron 2 suicidios y 1 persona privada de su libertad lesionada, a raíz de una riña.

67. En adición a todo lo anterior, para este Organismo resulta alarmante, por decir lo menos, que en la edición 2019 del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, realizado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, dicho Organismo se haya referido de manera concreta a las condiciones de gobernabilidad del establecimiento penitenciario en el cual ocurrió la muerte que se analiza. A raíz de lo cual, enfatizó la insuficiencia de personal de

---

64 Corte IDH, *Caso Juan Humberto Sánchez* vs. Honduras, Sentencia de 7 de junio de 2003, párr. 111

65 Ídem.

seguridad y custodia, que vigile el adecuado funcionamiento del Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo, Zacatecas. Situación que, efectivamente, se comprobó en el caso motivo de análisis, donde, una vez más, esta Comisión Estatal encontró insuficiente o nula vigilancia en algunas de las zonas que integran el centro, lo cual, es informado inclusive, de manera oficial, por la autoridad penitenciaria. Mientras que, en lo que hace a aspectos que promuevan la reinserción social de los internos, la Comisión Nacional encontró una deficiente separación entre procesados y sentenciados, así como insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación y una inadecuada organización y registros para el cumplimiento del plan actividades de los internos.

68. Por otro lado, en la edición 2020 de dicho Diagnóstico, el Organismo Nacional realizó observaciones relacionadas con los siguientes rubros:

- ✓ **Aspectos que garantizan la integridad de las personas privadas de la libertad Hacinamiento:**
  - Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los derechos humanos.
- ✓ **Aspectos que garantizan una estancia digna:**
  - Deficiencias en la alimentación.
  - Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las personas privadas de la libertad.
  - Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para la comunicación con el exterior.
  - Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de la cocina y/o comedores.
- ✓ **Condiciones de gobernabilidad**
  - Presencia de actividades ilícitas.
- ✓ **Reinserción social de las personas privadas de la libertad**
  - Deficiente separación entre procesados y sentenciados.
  - Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad.
  - Inadecuada vinculación de la persona privada de la libertad con la sociedad.

69. En ese contexto, este Organismo tiene por cierto que, los resultados de dicho diagnóstico, en sus ediciones 2019 y 2020, ponen en evidencia una vez más que, la Dirección General de Prevención y Reinserción Social del Estado de Zacatecas, incumple de manera reiterada su obligación reforzada de garantizar el derecho a la vida e integridad de las personas que se encuentran privadas de su libertad, en los centros penitenciarios a su cargo. Omisión que trae como consecuencia, la contravención de los diversos instrumentos jurídicos que, como ya se estableció con antelación, salvaguardan dichos derechos en favor de todo gobernado, incluyendo a las y los internos. Contravención que, como en el caso ocurrió, implica el quebrantamiento de los derechos fundamentales de dichas personas, específicamente, el derecho a la vida y el derecho a la integridad y seguridad de su persona.

70. Con base en los argumentos expuestos hasta este punto, este Organismo Estatal Autónomo, estima que las autoridades penitenciarias, en el régimen de ejecución de las penas de prisión y medidas de seguridad, impuestas por la autoridad jurisdiccional, tienen el incuestionable deber de apegarse al marco normativo nacional e internacional, de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad, pues es obligación del Estado Mexicano, velar por la vida e integridad de los internos, observando en todo momento lo dispuesto por el *corpus juris* invocado a lo largo del presente documento, así como, en lo particular, por el artículo 18, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que, en conjunto con la Ley Nacional de Ejecución Penal, reconoce el derecho de las personas privadas de la libertad a la reinserción social.

D. De la violación del derecho a la vida e integridad personal, en perjuicio de VD†, persona que se encontraba privada de su libertad en el Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo, Zacatecas**.**

71. En el caso motivo de estudio, este Organismo recopiló evidencias suficientes que acreditan que, el Estado, incumplió con su función reforzada como sujeto garante de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad. Específicamente, en perjuicio de **VD†**, pues se tiene debidamente comprobado que su deceso, aconteció en el interior del Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo, Zacatecas, precisamente, bajo la custodia

del Estado, según se desprende de las constancias que integran el sumario. Muerte que, de acuerdo con los resultados de la necropsia practicada a su cadáver, por el **DR. LUIS MANUEL SANDOVAL GARCÍA**, Perito Médico Legista, adscrito al Instituto Zacatecano de Ciencias Forenses, se debió a **una herida producida por objeto cortante, en el cuello**. Situación que se torna más grave, si se toma en consideración que, de acuerdo con la información recopilada, pese a múltiples intentos previos de suicidio y diversas lesionas autoinfligidas, las autoridades de dicho establecimiento penitenciario no implementaron las medidas de seguridad (positivas y/o negativas), adecuadas, para salvaguardar su integridad y su vida.

72. Motivo por el cual, como ya se apuntó anteriormente, esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, en su calidad de Órgano de Estado, responsable de la protección y defensa de los derechos humanos en el territorio zacatecano, se vio obligada a conocer de los hechos. Al advertir que la muerte de **VD†** se debió a la inseguridad imperante y la falta de personal que ejerza y cumpla eficazmente con funciones de seguridad y custodia en el Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo, Zacatecas. Circunstancias que, esta Comisión, evidenció anteriormente, con motivo de las Recomendaciones emitidas dentro de los expedientes **CDHEZ/325/2018, CDHEZ/428/2018 CDHEZ/454/2018** y **CDHEZ/509/2018**, cuyo origen, al igual que en el *sub judice*, fue el hecho de que diversos factores confluyeron para que, a la postre, se perdiera una vida humana.

73. Por lo tanto, se advierte una vez más que, el Estado Mexicano, incumplió con su obligación de asegurar y garantizar los derechos humanos de las personas que se encuentran privadas de su libertad en el Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo, Zacatecas. Circunstancia de reclusión en la cual, como ya se indicó, la autoridad penitenciaria al encargarse de su custodia, asume la calidad de garante, lo cual, lo obliga a preservar todos aquellos derechos que por disposición judicial han sido restringidos. Puesto que, quienes se encuentran en centros de reclusión, están sujetos a un régimen jurídico particular, y dicho sometimiento o especial sujeción, no justifica el detrimento o menoscabo de sus derechos fundamentales, como en el caso sucedió con la supresión del derecho a la vida, en perjuicio de **VD†.**

74. Luego entonces, en cumplimiento a lo ordenado por la regla 71 de las Reglas Mandela[66], disposición que mandata que, con independencia de que se inicie investigación interna, el Director de cualquier centro penitenciario deberá notificar sobre el fallecimiento, desaparición o lesión grave de un interno a una autoridad judicial, u otra que sea competente e independiente de la que administre el centro, siempre y cuando cuente con facultades de investigación, el **LIC. ANTONIO SOLÍS VELÁZQUEZ**, entonces Director del Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo, Zacatecas, notificó el fallecimiento de **VD†**, ocurrido el día 15 de mayo de 2019, al **INSPECTOR ADÁN ROSARIO JIMÉNEZ SOLANO**, entonces Director General de Prevención y Reinserción Social del Estado de Zacatecas, remitiendo copia del oficio mediante el cual lo hizo, a este Organismo.

75. Por lo tanto, de conformidad con lo ordenado por los diversos instrumentos jurídicos que sustentan la presente Recomendación, y, además, con fundamento en el Principio 34, del Conjunto de Principios para la Protección de todas las Personas Sometidas a Cualquier forma de Detención o Prisión[67], se inició la investigación de los hechos. Además, esta Comisión verificó que, en cumplimiento a dichos instrumentos jurídicos, la Representación Social también inició su respectiva indagatoria. Lo anterior, es posible constatarlo con el acta de aviso de hechos probablemente constitutivos de delito, levantada a las **16:50** horas del día **15 de mayo de 2019**, signada por la **C. SANDRA CINTIA GURROLA MEDELLÍN**, elemento de la

---

66 Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, 1. "Sin menoscabo de que se inicie una investigación interna, el director del establecimiento penitenciario comunicará sin dilación todo fallecimiento, desaparición o lesión grave de un recluso a una autoridad judicial u otra autoridad competente que sea independiente de la administración del establecimiento penitenciario y esté facultada para llevar a cabo investigaciones expeditas, imparciales y efectivas de las circunstancias y causas de ese tipo de ca sos. La administración del establecimiento penitenciario cooperará plenamente con esa autoridad y garantizará la preservación de todas las pruebas. 2. La obligación enunciada en el párrafo 1 de esta regla se aplicará igualmente siempre que existan motivos razonables para considerar que en el establecimiento penitenciario se ha cometido un acto que constituya tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, independientemente de que se haya recibido o no una denuncia formal. 3. Siempre que existan motivos razonables para considerar que se ha cometido alguno de los actos mencionados en el párrafo 2, se tomarán medidas de inmediato para velar por que ninguna persona que pudiera estar involucrada participe en la investigación o mantenga contacto con los testigos, la víctima o la familia de esta".

67 "Si una persona detenida o presa muere o desaparece durante su detención o prisión, un juez u otra autoridad, de oficio o a instancias de un miembro de la familia de esa persona o de alguna persona que tenga conocimiento del caso,

investigará la causa de la muerte o desaparición. Cuando las circunstancias lo justifiquen, se llevará a cabo una investigación iniciada de la misma manera cuando la muerte o desaparición ocurra poco después de terminada la detención o prisión. Las conclusiones de esa investigación o el informe correspondiente serán puestos a disposición de quien lo solicite, a menos que con ello se obstaculice la instrucción de una causa penal en curso".

Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas. Con motivo de dicha acta, se originó la carpeta de investigación [...], actualmente, a cargo del **LIC. FRANCISCO ALEJANDRO SANDOVAL CARRILLO**, Agente del Ministerio Público, adscrita a la Unidad Especializada en Investigación Mixta número 6, del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas.

76. Entonces pues, retomando el oficio signado por el **LIC. ANTONIO SOLÍS VELÁZQUEZ**, se tiene que, a través de éste, el funcionario explicó el contexto en que ocurrió la muerte de **VD†**, de acuerdo con el contenido del parte informativo signado por el **C. MARTÍN TORRES GALARZA**, Comandante del Primer Grupo de Guardia del centro penitenciario en comento. En dicho oficio y en el señalado parte informativo, la autoridad sostuvo que siendo las **16:15** horas del día 15 de mayo de 2019, el **C. REYNALDO CAMARILLO MARTÍNEZ**, personal de seguridad y custodia del centro que se encontraba de servicio en el área médica, reportó vía radio a la Comandancia, que requería la presencia del Comandante **NOÉ MARTÍN CRUZ SANTANA**. Esto, debido a que luego de dar un rondín por el área de Conductas Especiales y/o área de Medidas Especiales, observó en la estancia número 1, que el interno **VD†** se encontraba tirado en el piso, reportando además la presencia de sangre. Razón por la cual, se activó el *Protocolo aprobado al Sistema Penitenciario del Estado*, y se informó de manera inmediata al **DR. CUAHUTÉMOC SANDOVAL FIGUEROA**; galeno que corroboró la ausencia de signos vitales en la persona privada de libertad. A raíz de ello, se activó el *Protocolo de Atención a lesiones o muerte* y el *Protocolo de cadena de custodia*, notificando en consecuencia, al titular del centro penitenciario.

77. La información anterior, se refuerza con el contenido de la carpeta de investigación [...], de la cual, como ya se dijo, se desprende el acta de aviso de hechos probablemente constitutivos de delito. En dicho documento, se estableció que, a las **16:50 horas** del **15 de mayo de 2019**, se recibió aviso vía radio, por parte de la Comandancia de Guardia de la Dirección de Policía de Investigación con sede en el Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas, mediante el cual se informó sobre la localización del cuerpo sin vida de una persona del sexo masculino, en el área de Conductas Especiales y/o área de Medidas Especiales del Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo, Zacatecas. Razón por la cual, personal de la corporación en comento y personal del Instituto Zacatecano de Ciencias Forenses, se trasladaron al mencionado centro penitenciario, encontrando el cuerpo de una persona del sexo masculino, de aproximadamente 30 años, quien a simple vista presentaba heridas producidas por instrumento cortante, en el lado izquierdo del cuello. Asimismo, según consta en el acta, se localizó lo que al parecer era líquido hemático en la pared y en el piso, así como 3 hojas metálicas de afeitar. Esto último, también quedó documentado en el acta de registro en inspección del lugar del hecho, en donde la la **C. SANDRA CINTIA GURROLA MEDELLÍN**, Policía Primera de la Policía de Investigación, igualmente estableció que, en el área donde se encontró el cuerpo de **VD†** se localizaron 3 hojas metálicas de rastrillo.

78. Del mismo modo, en el acta se asentó que el **C. REYNALDO CAMARILLO MARTÍNEZ**, personal de seguridad y custodia del Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo, Zacatecas, informó al personal de la Fiscalía, que el nombre de la persona encontrada sin vida, era **VD†**. En cuanto a cómo se encontró su cuerpo, el custodio habría señalado que aproximadamente a las **16:15 horas** cuando le llevaron la comida y tocaron en la puerta, éste no respondió, percatándose en ese momento que se encontraba tirado en el piso. Por lo que al tratar de abrir el candado de la misma y advertir que estaba obstruido, se vio en la necesidad de forzarlo; y, al ver que el interno estaba tirado en el piso y lleno de sangre, se optó por llamar al médico, quien les notificó que ya no contaba con vida.

79. Nótese que la información proporcionada por el **C. REYNALDO CAMARILLO MARTÍNEZ**, dista de la que se asentó en el parte de novedades signado por él mismo y por los **CC. NOÉ MARTÍN CRUZ SANTANA, J. ISABEL TREJO MARTÍNEZ** y **HUGO CARDONA MENDOZA**, donde se estableció que, el motivo por el cual el **C. REYNALDO CAMARILLO MARTÍNEZ** habría acudido a la celda de **VD†**, fue en razón de “dar un rondín”. Lo cual permite a esta Comisión concluir que, con dicha afirmación, se trató de hacer creer que el área de Conductas Especiales y/o Medidas Especiales, era vigilada de manera eficaz, cuando en realidad no fue así, pues incluso, en la carpeta de investigación se cuenta con el testimonio del **PPL1**, quien

corroboró la versión de que, en realidad, en el horario en que **VD†**, fue encontrado sin vida, él mismo, junto con el referido **REYNALDO CAMARILLO MARTÍNEZ** le llevaban su comida.

80. Aunado a lo anterior, este Organismo observa que, en cumplimiento a la Regla 69[68], de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, (Reglas Nelson Mandela), la Representación Social informó sobre el deceso de **VD†** a sus familiares. Hecho que puede corroborarse con la compulsa de la carpeta de investigación [...], en la que obran las comparecencias, en calidad de testigo de identidad y reconocimiento de su cadáver, del **VI3** y de **VI1**, respectivamente hermano y abuela del ahora occiso. Por lo que, en consecuencia, con relación al deber que tienen las autoridades penitenciarias de informar a los familiares de los internos, cuando éstos pierden la vida estando bajo su custodia, independientemente de las causas, esta Comisión advierte que, si bien el deceso de **VD†** no fue notificado por quien entonces ejercía el cargo de Director del Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo, Zacatecas; la debida y oportuna notificación a la Representación Social por parte de las autoridades del establecimiento penitenciario, subsanó dicha omisión. Y, por ende, no se retardó de manera injustificada o prolongada, informar a los familiares de **VD†** sobre su lamentable deceso.

81. A continuación, este Organismo analiza el tema concerniente a las dimensiones del espacio donde **VD†** perdió la vida, en relación con el número de internos que lo habitaban. Para ello, es dable citar la Guía Complementaria “Agua, saneamiento, higiene y hábitat en las cárceles”,[69] elaborada en 2013 por el Comité Internacional de la Cruz Roja, en coordinación con la Organización de las Naciones Unidas. A través de dicho documento se estableció que, aun cuando existen recomendaciones de diversos Organismos Internacionales, en lo referente a las condiciones de habitabilidad de los espacios destinados para los internos, como pueden ser las de ventilación, iluminación e higiene. No existe una norma universal respecto a las dimensiones de espacio, por lo cual se señalaron las medidas que aproximadamente se manejan en diversos países, incluyendo a México, en donde la medida sugerida para celdas individuales es de **4m^2**, mientras que **15m^2**, es la medida propuesta para celdas triples.[70]

82. Relativo a lo anterior, resulta de elemental importancia hacer énfasis en el hecho de que el referido Comité Internacional de la Cruz Roja, ha establecido una serie de recomendaciones generales, con el propósito de definir un criterio sensato de habitabilidad en los espacios que ocupan las y los internos. Para ello considera las medidas que debe tener una celda cuando es ocupada por una sola persona, así como cuando es habitada por 10 internos o internas. De este modo, se tiene la siguiente tabla:

Alojamiento en celda individual:	Alojamiento en celda múltiple
—Un detenido. — Dimensión de la celda de 5.4 m2 —Incluye una cama, pero no los servicios sanitarios.	— Diez detenidos. — Dimensión del dormitorio de 3.4 m2 por recluso (superficie total: 34 m2). — Incluye el espacio para las literas y servicios sanitarios.

83. En cuanto a este tópico, se cuenta con la información provista por las autoridades del Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo, Zacatecas, quienes, desde los primeros documentos oficiales, afirmaron que el señor **VD†** habitaba la celda número 1, del área de Conductas Especiales y/o Medidas Especiales. Dicha información, quedó asentada tanto en el oficio de fecha 15 de mayo de 2019, firmado por el **LIC. ANTONIO SOLÍS VELÁZQUEZ**, en ese tiempo Director del centro, mediante el cual informó sobre el deceso del interno al entonces Director General de Prevención y Reinserción Social del Estado, del cual este Organismo obtuvo copia. Así como en el parte de novedades de esa misma fecha, signado por el personal a su cargo: **NOÉ MARTÍN CRUZ SANTANA, REYNALDO CAMARILLO MARTÍNEZ, J. ISABEL TREJO MARTÍNEZ** y **HUGO CARDONA MENDOZA.** Del mismo modo, fue corroborada por el **C. REYNALDO CAMARILLO MARTÍNEZ**, custodio penitenciario que, en

68 Ídem, Regla 69. “En caso de fallecimiento de un recluso, el director del establecimiento penitenciario informará inmediatamente a sus familiares más allegados o a la persona designada como contacto para casos de emergencia. Ante un supuesto de enfermedad o lesión grave o de traslado de un recluso a un centro hospitalario, el director deberá notificar a las personas que el recluso haya designado para recibir información relacionada con su estado de salud. Se respetará la solicitud expresa Primera parte, del recluso de que no se informe a su cónyuge o familiar más cercano en caso de enfermedad o lesión”.

69 La Guía Complementaria “Agua, saneamiento, higiene y hábitat en las cárceles”, puede consultarse en: https://www.icrc.org/es/doc/assets/files/publications/icrc-002-4083.pdf

70 Centros de Prevención y Readaptación Social, Normas de Diseño, Secretaría de Gobernación. México, 1982.

entrevista sostenida con personal de la Policía de Investigación, aclaró que una de las celdas del área de Conductas Especiales y/o Medidas Especiales era habitada por el hoy occiso y la otra por el **PPL2.**

84. Ahora bien, del acta de registro e inspección del lugar del hecho, suscrita por la propia **SANDRA CINTIA GURROLA MEDELLÍN**, se desprende que la celda que en vida era habitada por el interno **VD†**, cuenta con una medida aproximada de **2.50 metros por 1 metro** y, dentro de ésta, se encuentra el sanitario. De acuerdo con la tabla anterior, ello da un total de **2.50 m²**, medida que, de ningún modo, se ajusta a la sugerencia de **4m²** de la Cruz Roja y de la Organización de las Naciones Unidas; y hace posible establecer además, que las medidas de dicha celda no son las idóneas para ser habitadas ni siquiera por una sola persona.

85. Dichas falencias, detectadas en la infraestructura del Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo, Zacatecas, permiten establecer una vez más el incumplimiento del Estado, en el deber reforzado que tienen para con la protección de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad. Incumplimiento que, además, se evidencia con la constante falta de personal de seguridad y custodia del Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo, Zacatecas, así como con la carencia de cámaras de vigilancia; factores que también fueron motivo de observación en los instrumentos recomendatorios que se han emitido con anterioridad. Y que, del mismo modo, convergieron en la pérdida de la vida de **VD†**, al no existir vigilancia en el área en la cual se encontraba, pese a que anteriormente había atentado contra su propia vida e integridad, según se desprende del expediente del área de Psicología, provisto por la Dirección actual del centro penitenciario, como se verá más adelante.

86. Lo anterior, se corrobora con el informe rendido por el **LIC. ANTONIO SOLÍS VELÁZQUEZ**, entonces Director del centro penitenciario, quien, en fecha 12 de julio de 2019, informó que en el área donde perdió la vida el interno **VD†**, no existe cobertura de videovigilancia. De la misma manera, remitió el rol de servicio del personal a su cargo, del cual, se desprende que, en el horario comprendido entre las **08:15** y las **16:30 horas,** del día 15 de mayo de ese mismo año, horario en que aconteció dicho deceso, se encontraba distribuidos en el establecimiento: el **Jefe de Seguridad, 2 Comandantes, 21 elementos de seguridad y custodia** y **6 elementos de la Policía Estatal Preventiva de Zacatecas**; dando un total de **30 personas**. Sin embargo, se advierte que, en efecto, ningún elemento adscrito al centro o de dicha Corporación Policiaca, se encontraba asignado al cuidado de los internos ubicados en el área de Conductas Especiales y/o Medidas Especiales.

87. Lo anterior, en el caso del interno **VD†**, se torna aún más grave, puesto que, en el expediente, se encuentra debidamente probado que este había atentado en diversas ocasiones contra su vida e integridad. Razón por la cual, existían recomendaciones del área de Psicología, de mantener una vigilancia estrecha sobre él, ya que había sido diagnosticado con **trastornos mentales y del comportamiento debido al uso de cannabis.** Al respecto, se cuenta con los expedientes de las áreas Médica, de Psicología y de Psiquiatría, del que se desprenden diversas notas que dan cuenta de lo anteriormente afirmado. Como es el caso de la nota de fecha 08 de mayo de 2018, en el cual, el **DR. DAGOBERTO MEDRANO RODRÍGUEZ**, Médico adscrito al Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo, Zacatecas, documentó que el interno manifestó que él mismo se ocasionó las heridas que en ese momento tenía, además de documentar la presencia de aliento alcohólico.

88. Asimismo, se desprende la historia clínica de salud mental del interno, elaborada el 14 de agosto de ese mismo año, por el **DR. HUMBERTO REGIS ALCALÁ**, Médico adscrito al Pabellón Psiquiátrico de dicho establecimiento, quien en ese momento pudo establecer que, 2 meses atrás, **VD†**, habría iniciado a presentar ideas delirantes de daño y alucinaciones auditivas. Aunado a ello, el interno presentaba ideas megalomaníacas, con alucinaciones auditivas y visuales, con presencia de insomnio global, a causa de lo cual se lesionaba él mismo en los antebrazos, se picaba el abdomen con picahielos y llenaba de sangre las paredes. Por otro lado, el profesionista encontró que presentaba laceración en el cuello, abdomen con 14 heridas peniformes, además de laceración; así como 9 heridas en antebrazo derecho y 5 en brazo izquierdo, de aproximadamente 3 centímetros de longitud. Motivo por el cual, recomendó inicio de tratamiento, **vigilancia estrecha y estancia en pabellón psiquiátrico.**

89. Lo anterior, se derivó de sugerencia que, en esa misma fecha, realizó la **LIC. JAZMÍN PÉREZ BECERRIL**, Jefa del Departamento de Psicología del Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo, Zacatecas, al **LIC. ÓSCAR GILBERTO MARTÍNEZ LIRA**, entonces Director del establecimiento penitenciario, quien señaló la necesidad de que el área de Psiquiatría valorara al interno, en razón de una posible paranoia en aumento por la remisión de consumo de sustancias, aparente daño orgánico, ideación suicida con intento. Motivo por el cual, además de lo anterior, **sugirió medidas de seguridad especiales en su favor**.

90. Aunado a ello, se cuenta con una intervención de emergencia, de fecha 04 de septiembre de 2018, de la que se desprende que **VD†**, atentó contra su vida, refiriendo que escuchaba susurros desde las paredes, por lo que se hirió en su mano izquierda con un vidrio. Derivado de este evento, en esa misma fecha, la **LIC. JAZMÍN PÉREZ BECERRIL**, Jefa del área de Psicología, dirigió oficio al **LIC. ÓSCAR GILBERTO MARTÍNEZ LIRA**, en ese tiempo, Director del establecimiento penitenciario, en el que **nuevamente recomendó mantenerlo bajo vigilancia estrecha**. Como respuesta a lo anterior, se cuenta con la nota subsecuente del área de Psiquiatría, realizada por el **DR. HUMBERTO REGIS ALCALÁ**, Médico adscrito al Pabellón Psiquiátrico de dicho establecimiento, elaborada en fecha 05 de septiembre de 2018, en la que el profesionista estableció que **el interno había vuelto a consumir drogas**, luego de que una semana antes fuera llevado a su celda de origen (no se establece área). De la misma manera, asentó que **el interno había consumido dos días antes** y debido a ello, volvió a presentar ideas delirantes de daño y referencia, megalomaníacas, con errores de conducta auto lesivas y de juicio, con autolesión en la muñeca de 2 heridas profundas, con somatizaciones, con labilidad emocional, con insomnio global desde hace 4 días, con buen apego al tratamiento, niega afectos adversos; ideas delirantes de daño y referencia, alucinaciones auditivas y visuales. Razón por la cual, recomendó que permaneciera nuevamente en pabellón psiquiátrico.

91. Por otro lado, de la nota evolutiva de Psicología, suscrita por el **LIC. GUMARO VILLALPANDO PADILLA**, personal de Psicología del Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo, Zacatecas, en fecha 15 de abril de 2019, se desprende que el **interno nuevamente tuvo un intento suicida**, por sentirse desesperado, en su celda. Asimismo, el profesionista asentó que **VD†,** presentaba lesiones en diferentes partes de su cuerpo, como cortadas en brazos y piernas, cortes en la cara y cabeza y marcas en el cuello que se ocasionó el mismo al intentar suicidarse. Posterior a ello, el 22 de abril de 2019, la **LIC. JAZMÍN PÉREZ BECERRIL**, Jefa del Departamento de Psicología del Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo, Zacatecas, dirigió oficio al **LIC. ANTONIO SOLÍS VELÁZQUEZ**, en ese tiempo, Director del establecimiento penitenciario, informándole sobre **un atentado más, contra su propia integridad,** del interno **VD†**. En esta ocasión, cortándose el brazo izquierdo de manera repetida, haciendo referencia a ideas delirantes, con delirio de persecución obvios en su discurso y alteración de la realidad. Por ello, solicitó nueva valoración por el área de Psiquiatría y **recomendó una vez más una estrecha vigilancia**, para evitar se agrediera nuevamente. Toda esta información, fue corroborada por la **LIC. JAZMÍN PÉREZ BECERRIL**, en la entrevista que brindara al personal de la Policía de Investigación el 15 de mayo de 2019.

92. No obstante lo anterior, del expediente proporcionado por el **LIC. JOSÉ TEÓFILO ÁRIAS MORALES**, actual Director del Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo, Zacatecas, y que le fuese a su vez provisto por las diversas áreas enlistadas en la prueba número 18 de la presente Recomendación, no se desprenden más intervenciones que permitan establecer que se siguió atendiendo en las áreas médicas, psicológicas o psiquiátricas a **VD†**, hasta la fecha de su deceso, el 15 de mayo de 2019. Asimismo, la autoridad no reportó que, durante el período de tiempo en que se realizaron las recomendaciones de mantener estrecha vigilancia sobre el interno, se hayan emprendido acciones que no se limitaran meramente a colocar al interno solo, en una celda. La cual, no contaba con ventilas, e imposibilitó que el interno conviviera con otras personas, no contribuyó a mejorar su condición de salud mental.

93. Por consiguiente, el casi aislamiento al que se vio sometido **VD†**, no se considera una acción que actualice dicha vigilancia; pues como se ha establecido en anteriores Recomendaciones, a falta de cámaras de videovigilancia, debe implementarse la seguridad provista por el personal del centro penitenciario de que se trate. La seguridad de un centro

penitenciario depende pues, de un grupo del personal que esté alerta y que interactúe y conozca a sus reclusos, que desarrolle relaciones positivas con éstos y que sea consciente de lo que ocurre en el establecimiento penitenciario. Donde haya un trato justo y un sentido de "bienestar" entre los reclusos y el personal se asegure de que los reclusos se mantengan ocupados en actividades constructivas y productivas que contribuyan a su futura reinserción social. Este concepto se describe frecuentemente como seguridad dinámica y es cada vez más adoptado de manera global.[71] Máxime si como en el caso ocurrió, se está ante la presencia de internos que son aún más vulnerables por su condición de salud mental, y más aún, cuando se han tenido intentos previos de suicidio.

94. Sin embargo, a pesar de que como ya se dijo, no existen cámaras de vigilancia ubicadas en el área donde perdió la vida **VD†** y con todo y que se tenía pleno conocimiento de su estado de salud mental y de las recomendaciones anteriormente dichas, este Organismo nota que no se actuó en consecuencia. Lo cual, se estima directamente atribuible al **LIC. ÓSCAR GILBERTO MARTÍNEZ LIRA** y al **LIC. ANTONIO SOLÍS ÁLVAREZ,** quienes hasta antes de que el interno perdiera la vida, ocuparon en diversos momentos el cargo de Directores del Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo, Zacatecas. Ya que, eran las personas sobre las que recaía la responsabilidad de implementar las medidas necesarias para salvaguardar su vida a integridad. No obstante, dichas medidas se limitaron a resguardarlo en una celda que, como ya se dijo en líneas antecedentes, no cumple siquiera con las medidas mínimas para ser habitada por una persona.

95. De la misma manera, se advierte que, a pesar de que tenían pleno conocimiento de que el área donde perdió la vida **VD†** no cuenta con cámaras de video que permitan su vigilancia de manera remota, no designó ni una sola persona para realizar su vigilancia estrecha y constante en aras de salvaguardar su vida e integridad. Lo que repercutió en que, muy posiblemente éste atentara una vez más contra su vida; hecho que, de ninguna manera les resta responsabilidad, pues, como se indicó en párrafos anteriores, aun en eventos de suicidio, la autoridad penitenciaria está obligada a responder por los hechos, ante la evidente falta de protección del derecho a la vida y a la integridad de la persona privada de libertad.

96. Lo anterior, como ya se dijo antes, y tal y como esta Comisión ha probado en las diversas Recomendaciones que se han emitido por muertes de personas privadas de su libertad, obedece a la constante falta de personal en el Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo, Zacatecas. Lo cual, en el caso concreto, se corrobora con el informe que, en vía de colaboración, rindió el **LIC. JOSÉ TEÓFILO ARIAS MORALES**, Director del Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo, Zacatecas, en fecha 29 de octubre de 2020, en el que indicó que, en fecha 15 de mayo de 2019, el **número total de internos** era de **326,** mientras que en el horario en que sucedieron los hechos, como ya también se apuntó, el personal que resguardaba el centro era un total de **30 personas**.

97. En este punto, resulta conveniente referirse al *Manual de Cárceles. Guía para la planeación y el diseño arquitectónico*[72]*,* retomado por la Comisión Nacional de los derechos Humanos, en el documento denominado "La sobrepoblación en los centros penitenciarios de la República Mexicana", edición 2016, (en el cual, sin soslayar el hecho de que, con independencia de la atención que debe darse a las diferentes zonas de la prisión, así como a los turnos de personal, aspectos que también deben atenderse con la misma importancia), se propuso lo siguiente:

Nivel de seguridad de la prisión	**Número de internos por custodio.**
Alta	1
Media	10
Baja	20

98. Además, con relación al tema del número de internos que corresponde vigilar a cada elemento de seguridad y custodia, resulta crucial hacer énfasis en que la Organización de las Naciones Unidas, se ha pronunciado en reiteradas ocasiones, en cuanto a la importancia que

71 Ídem.

72 ROJAS A., Roberto et al. *Cárceles. Guía para la planeación y diseño arquitectónico*. Precoor. México. 2012. pág. 260.

debe establecerse entre el número de personal de seguridad y el total de internos. Por lo tanto, si se atiende a las sugerencias anteriores, se obtiene que, en el turno en que perdió la vida **VD†** el número de internos que le correspondía vigilar a cada custodio, era en promedio de **10.8**. Lo cual, evidentemente, no rebasa el número sugerido de **20,** si se toma en cuenta que se trata de un centro de seguridad baja.

99. Sin embargo, si se toma en cuenta que algunas personas privadas de su libertad son de alta peligrosidad, entonces podrán aplicarse medidas especiales de seguridad, tal y como lo prevé el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; lo que ocurre también con personas que requieren la aplicación de tales medidas, como en el caso concreto sucedió. Lo cual, implicaría entonces que, por ejemplo, se deba aumentar el número de custodios o policías penitenciarios que deban vigilar a cierto número de internos, de acuerdo con la tabla anterior. Circunstancia que es además coincidente con la fracción II del artículo 37 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que contempla como medida de seguridad especial, entre otras, la **vigilancia permanente de todas las instalaciones del Centro Penitenciario, incluyendo módulos y locutorios.**

100. Por lo tanto, si tomamos en consideración que, el nivel de seguridad del Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo, Zacatecas, es baja, se puede advertir que, *prima facie*, se cumple con dicha propuesta. Sin embargo, como se señaló en el párrafo anterior, hay internos que pueden ser sujetos de medidas de seguridad especiales, como en el caso específico sucedió con **VD†**. Por ello, debe retomarse el hecho de que, del personal disponible en el establecimiento penitenciario, en fecha 15 de mayo de 2019, ningún custodio o custodia estaba asignado a la vigilancia de la celda número 1, del área de Conductas Especiales y/o Medidas Especiales. Lo cual hace por demás evidente, el incumplimiento de la obligación reforzada de cuidado, que el Estado debe asumir en cuanto a los derechos humanos de las personas privadas de su libertad, en los centros de detención sujetos a su jurisdicción. Hecho que, innegablemente, impactó en la falta de control y seguridad efectiva de esa zona, trayendo como consecuencia, la pérdida de la vida de **VD†**, con independencia de las causas de dicho evento.

101. Lo anterior, resulta alarmante para este Organismo, y se recalca, porque no es la primera vez que se acredita la insuficiencia de personal en las diversas áreas en que se divide el Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo, Zacatecas. Pues en las Recomendaciones recaídas dentro de los expedientes **CDHEZ/325/2018**, **CDHEZ/454/2018**, **CDHEZ/509/2018** y **CDHEZ/428/2019** por hechos en que también se perdieran vidas humanas de personas privadas de su libertad en dicho establecimiento, se hizo énfasis en dicho factor. En el primer caso, se acreditó que, debido a la falta de personal penitenciario, la persona encargada de la vigilancia del circuito cerrado atendía otras labores, al momento de los hechos en que perdiera la vida la víctima directa identificada, lo que impidió que pudiera percatarse de lo sucedido con el monitoreo. En el segundo, se demostró que, en el área del gimnasio, zona donde perdió la vida la víctima identificada, ningún elemento de seguridad y custodia se encontraba a cargo de la vigilancia del área. Aunado a ello, en ambos casos, este Organismo acreditó que solo un elemento de seguridad y custodia tenía a su cargo la vigilancia de 27 internos. Circunstancia que se repitió en el Área de Observación y Clasificación (COC), donde perdió la vida la víctima directa del expediente **CDHEZ/428/2019.**

101. Se advierte entonces que, la insuficiencia de personal de seguridad y custodia, en el centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo, Zacatecas, hace evidente la falta de atención de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas, por conducto de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social del Estado de Zacatecas, para atender dicha problemática evidenciada por este Organismo. No solo en el *sub judice*, sino en los que se reseñaron en el acápite anterior, lo que representa además una deficiencia en la implementación de medidas de seguridad adecuadas, para vigilar las múltiples zonas de dicho establecimiento penitenciario. Pues, si así hubiere sido, se habrían implementado acciones correctivas a tales deficiencias, a partir de la muerte de las víctimas identificadas con motivo de la integración de los citados expedientes. De tal suerte que, para la fecha en que sucedieron los hechos que motivan esta Recomendación, la autoridad penitenciaria ya habría mejorado las condiciones de seguridad y aumentado el personal encargado de vigilar todos los espacios en que se ha dividido el centro.

102. Con lo anterior, se demuestra que, la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas, incumple de manera reiterada con su posición de garante de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad. En el presente caso, específicamente de la población penitenciaria del Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo, Zacatecas, al no aumentar el número de personal operativo que se requiere para la supervisión y vigilancia de las diferentes áreas en las que se divide dicho establecimiento. Lo cual, representa un riesgo para dicha población, repercutiendo, como en el caso nos ocupa, en la violación al derecho a la vida e integridad de **VD†**; pero, además, impacta de manera directa en las condiciones de seguridad en que los familiares de los internos conviven con éstos, y en las que el personal que ahí labora desempeña sus funciones.

103. Aunado a lo anterior, es incuestionable la falta de cámaras de vigilancia en todas las zonas del Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo, Zacateca, lo cual se corrobora, en el presente caso, con el informe rendido por el **LIC. JOSÉ TEÓFILO ÁRIAS MORALES**, actual Director del establecimiento penitenciario, quien dio cuenta sobre la carencia de cámaras de videovigilancia, en el área donde perdió la vida **VD†**. Asimismo, se cuenta también con el testimonio del **C. MARTÍN TORRES GALARZA**, Comandante de la Primera Guardia, quien manifestó a este Organismo que, por falta de personal, un solo custodio penitenciario se encuentra a cargo de las áreas de Conductas Especiales y/o Medidas Especiales, Psicología y Área Médica; indicando de la misma manera que en esa área no existen cámaras de vigilancia. Lo cual, denota también la responsabilidad institucional del centro, puesto que no se tiene acreditado que, pese a las muertes de internos, en las cuales dicho factor fue determinante para que no existiera una adecuada vigilancia, los directivos no han realizado gestiones para subsanar dicha carencia. Así como también de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social del Estado de Zacatecas; ya que, pese a que este Organismo ha hecho énfasis en dicha falencia, es un aspecto que, hasta la fecha, no se ha atendido. Y, además, hace que cobren sentido las observaciones que, hasta este punto, se han realizado, habida cuenta de que dicha problemática, también se detectó por este Organismo en los asuntos señalados con anterioridad.

104. En lo que respecta al expediente **CDHEZ/325/2018**, del que deriva la Recomendación **02/20**, la falta de personal suficiente impactó en el debido monitoreo de dicho sistema, pues, la persona encargada de ello, al momento de los acontecimientos, se encontraba realizando otras labores, precisamente, debido a la falta de elementos de seguridad y custodia, que cubran la vigilancia de todo el centro. Por lo que hace a la Recomendación **03/2020**, recaída dentro del expediente **CDHEZ/454/2018**, se acreditó que, en el área de gimnasio, ni siquiera se cuenta con cámaras ubicadas en dicha zona; circunstancia que como se ha establecido, se repitió en el caso que nos ocupa.

105. En lo que concierne al expediente **CDHEZ/509/2018**, del que deriva la Recomendación **04/2020**, pese a haber cámaras ubicadas en el área de separos, como se comprobó en el asunto relacionado con el expediente **CDHEZ/325/2018**, las grabaciones del lugar no fueron proporcionadas en su totalidad, ni a este Organismo, ni a la Representación Social. Circunstancia que, además, representa un indebido entorpecimiento a las investigaciones iniciadas para el esclarecimiento de los hechos y conlleva el incumplimiento, por parte de las autoridades, de las garantías de protección, respeto y garantía de los derechos humanos de los internos, sumado también al incumplimiento las obligaciones de prevención, investigación y sanción de los posibles responsables de violentar dichos derechos. Finalmente, en el caso del expediente **CDHEZ/428/2019**, este Organismo acreditó que, al igual que en el área de Conductas Especiales y/o Medidas Especiales, en el Centro de Observación y Clasificación no existen cámaras de vigilancia.

106. Las acotaciones anteriores, guardan estrecha relación con el hecho de que, en los asuntos citados y en el que ahora se resuelve, el Estado no ha logrado probar que cumplió con su posición de garante de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad. Puesto que, acorde al criterio sustentado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos:

> *"corresponde a la parte demandante, en principio, la carga de la prueba de los hechos en que se funda su alegato; no obstante, se ha destacado que a diferencia del derecho penal interno en los procesos sobre violaciones de derechos humanos, la defensa del Estado no puede descansar sobre la imposibilidad del demandante*

de allegar pruebas, cuando es el Estado quien tiene el control de los medios para aclarar hechos ocurridos dentro de su territorio"[73]*.*

107. Por lo tanto, es posible afirmar que, cuando se investigan violaciones a derechos humanos, el Estado tiene la obligación de desvirtuar los hechos atribuidos a sus agentes, pues es éste el que tiene el control de todos los medios de convicción para aclarar los hechos ocurridos. Sobre todo, cuando, como ya se ha señalado, la víctima del quebranto a sus derechos humanos, se encuentra en un estado de vulnerabilidad, como sucedió en el caso específico de **VD†,** que, al estar privado de su libertad, se encontraba bajo su total subordinación. De modo tal que el Estado, debió asumir una responsabilidad especial, reforzada, respecto a la garantía de sus derechos, al depender su integridad personal y su vida, completamente de éste.

108. Por consiguiente, esta Comisión reitera que, la carencia de cámaras de vigilancia, ubicadas en cada una de las áreas del Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo, Zacatecas, imposibilita que se tenga debidamente documentado cómo sucedió la muerte de **VD†.** Y, en consecuencia, dificulta la investigación del Ministerio Público, al no contar con datos de prueba suficientes, tendentes a inferir si alguna persona participó de los hechos en donde éste perdió la vida, para así poder judicializar el asunto; o si, por el contrario, efectivamente el interno atentó contra su vida. Circunstancia que se atribuye de manera directa al Estado, pues el hecho en sí representa una violación a sus derechos humanos, de acuerdo con los estándares ya establecidos en el presente documento recomendatorio.

103. En el contexto anterior, este Organismo advierte con inquietud que, la falta de atención a las medidas especiales de seguridad que requería el ahora occiso, como eran la vigilancia estrecha y constante, sugerida por los profesionistas en Psicología y Psiquiatría que lo atendieron durante su reclusión, por parte de quien detentó la dirección del Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo, Zacatecas, durante ese período, denotan además la falta de coordinación que impera en el centro. Lo cual, es otro de los problemas detectados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, en sus ediciones 2017, 2018 y 2019. Problemática que la Dirección General de Prevención y Reinserción Social del Estado de Zacatecas, ha omitido atender, y los detalles aquí evidenciados, dan cuenta de ello, y es, además, incompatible con el Principio XX del Conjunto de Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad de las Américas.

104. Dichas disposiciones imponen que, el personal que tenga bajo su responsabilidad la dirección, custodia, tratamiento, traslado, disciplina y vigilancia de personas privadas de libertad, deberá ajustarse, en todo momento y circunstancia, al **respeto a los derechos humanos de las personas privadas de libertad** y de sus familiares. **Debiendo seleccionarse cuidadosamente**, teniendo en cuenta su integridad ética y moral, sensibilidad a la diversidad cultural y a las cuestiones de género, **capacidad profesional, adecuación personal a la función, y sentido de responsabilidad.** Lo cual implica que, en los lugares de privación de libertad, el Estado debe apostar por la elección **de personal calificado y suficiente** para garantizar la seguridad, vigilancia, custodia, y para atender las necesidades médicas, **psicológicas,** educativas, laborales y de otra índole.

105. En ese orden de ideas, retomando el Diagnóstico de Supervisión Penitenciaria 2019, elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, este Organismo Local concluye que, persiste la problemática de falta de personal de seguridad y custodia, al interior del Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo, Zacatecas, detectado por el Organismo Nacional en dicho informe. Circunstancia que, infortunadamente, repercute en una deficiente vigilancia de todas las áreas que integran la infraestructura del establecimiento y, por ende, impacta en el control eficaz que debe prevalecer, con respecto a las condiciones de seguridad, no solo de los internos, sino del propio personal adscrito al centro. Y, desde luego, de las personas que visitan a los internos, tal y como lo ha comprobado esta Institución, en las Recomendaciones emitidas en los últimos años, que tuvieron como origen, la muerte de una o más personas privadas de su libertad, hechos violentos suscitados al interior de los centros penitenciarios de esta Entidad Federativa.

---

73 Corte IDH. Caso Escher y otros Vs. Brasil, sentencia de excepciones Preliminares, fondo, reparaciones y costas del 6 de julio de 2009. Párr. 127."·

106. En el presente caso, es indudable que, a pesar de las recomendaciones realizadas por los encargados de las áreas de Psicología y Psiquiatría del Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo, Zacatecas, ni el **LIC. ÓSCAR GILBERTO MARTÍNEZ LIRA**, ni el **LIC. ANTONIO SOLÍS VELÁZQUEZ**, ex Directores del Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo, Zacatecas, coordinaron acciones con el ánimo de tutelar su vida y su integridad personal. De haber sido así, no habrían limitado su actuar a ingresarlo solo en una celda, pues como se ha evidenciado, dicha medida resultó ínfima en todo momento, dados los intentos de suicidio y atentados contra su propia integridad personal.

107. Circunstancias que, dichos funcionarios, debieron atender de manera puntual, reforzando su vigilancia no solo a través de cámara de vigilancia, sino de manera constante con la presencia de personal de seguridad y custodia. Empero, ante dichas omisiones, no puede tenerse certeza de cómo perdió en realidad la vida **VD†**, sobre todo si tomamos en consideración que, en la mayoría de las ocasiones en que fue valorado por el personal médico, psicológico y psiquiátrico, se detectó o documentó que éste habría consumido alcohol o drogas; además de dañar su integridad con objetos cortantes o punzantes.

108. De tal suerte que, resulta imperativo que tanto la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, como la Fiscalía General de Justicia del Estado, investiguen a fondo los hechos, de manera imparcial y objetiva, con la finalidad de esclarecer los hechos en que **VD†** perdió la vida. Además de ello, este Organismo reitera la importancia de contratación de personal penitenciario suficiente en número y debidamente capacitado, para detentar la seguridad del Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo, Zacatecas. Pues, en la medida en que eso suceda, se evitarán eventos como el que ahora nos ocupa, incluyendo las muertes violentas que han sido documentadas en otras Recomendaciones, ya citadas con anterioridad, dentro de esta Recomendación.

109. De ahí la importancia de que se insista en la contratación de personal suficiente, que cumpla debidamente con las labores de vigilancia de todas las personas privadas de su libertad, como medida de mitigación de la carente infraestructura del Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo, Zacatecas. Pues además, debe tomarse en consideración que, si bien con el creciente aumento de la tecnología, la cámara de observación se ha convertido en una alternativa popular para la observación directa por parte del personal penitenciario, los puntos ciegos de éstas, aunados a la falta de supervisión efectiva de los monitores, por razones que, incluso ya han sido evidenciadas en esta Recomendación, trágicamente, se ha manifestado muertes de internos que ocurren a plena vista del equipo de la cámara. Por lo tanto, la cámara de vigilancia nunca se debe utilizar como un sustituto de la observación del recluso suicida por parte del funcionario y, si se utiliza, solo debe complementar la observación directa del personal penitenciario.

110. Con base en los argumentos hasta aquí esgrimidos, este Organismo considera de elemental importancia que, por parte de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social del Estado de Zacatecas, se prevea la gestión de mecanismos de seguridad física y procedimental como aspectos fundamentales de cualquier establecimiento penitenciario. Por lo cual, como se dijo en líneas anteriores, deberá apostarse siempre por implementar la seguridad dinámica en todos sus aspectos. Por lo cual, es importante resaltar que, *“el concepto de la seguridad dinámica implica que el personal penitenciario subalterno debe que estar capacitado y motivado para desarrollar buenas relaciones personales con los reclusos, para entenderlos y comprenderlos como individuos, para ofrecerles ayuda en sus problemas personales con empatía y para involucrarse con ellos mediante un diálogo con un sentido particular”*.[74]

111. Lo anterior, debido a que los internos tienen mayor contacto y con mayor frecuencia con el personal subalterno, dada a la naturaleza propia de las interacciones diarias, por lo que, si dichas interacciones son positivas, tenderán a reducir actitudes y conductas destructivas de los internos y favorecerán el trabajo constructivo, con miras a una verdadera reinserción social. Aunado a ello, la seguridad dinámica permite que el personal se dé cuenta con mayor facilidad de las conductas alarmantes por parte de un recluso, como tentativas de fuga, episodios de

74 Ídem.

violencia entre reclusos o contra el personal, el contrabando de artículos prohibidos, etcétera. Puesto que, *"la seguridad dinámica (…) ofrece la posibilidad de proporcionar información de advertencia antes de que se produzcan ciertos incidentes no deseados y permite que el personal penitenciario tome medidas preventivas para desalentar que se produzcan potenciales incidentes peligrosos".* [75]

112. Este enfoque hacia la seguridad pública (prevención de fugas) y la seguridad en el establecimiento penitenciario (orden interno) reconoce que ambos son posibles solamente a través de la relación entre el personal y los reclusos. La seguridad dinámica implica el conocimiento de lo que ocurre en el establecimiento penitenciario, además de ofrecer un contexto de seguridad y protección con relación a todas las actividades que se llevan a cabo en el establecimiento penitenciario. El concepto de seguridad dinámica cuenta con el beneficio de abordar a los reclusos de forma individual, obteniendo perspectivas materiales e intuitivas de la gestión del establecimiento. El concepto de seguridad dinámica se basa en los siguientes elementos:

- Relaciones positivas, comunicación e interacción entre el personal y los reclusos.
- Profesionalismo.
- Recolección de información relevante.
- Observación y mejora del clima social en la institución penal.
- Firmeza y ecuanimidad.
- Comprensión de la situación personal del recluso.
- Comunicación, relaciones positivas e intercambio de información entre todos los empleados.[76]

113. Luego entonces, partiendo de la premisa de que los sistemas penitenciarios deberían garantizar la implementación de relaciones efectivas entre el personal y los reclusos, a través de la selección de personal y la capacitación, se deduce que, la seguridad dinámica, resulta ser más efectiva cuando existe un grupo profesional, correctamente capacitado. Motivo por el cual, el personal debe ser seleccionado y capacitado especialmente para trabajar con reclusos, dada la importancia de construir y mantener relaciones con éstos, la apropiada capacitación, debería estar reflejada y fomentada a través de la forma en que el personal penitenciario es evaluado, capacitado y seleccionado. Por todo ello, debe implementarse, de manera paulatina, el desarrollo de políticas y procedimientos apropiados que impacten de forma positiva en una contratación efectiva de personal, selección y capacitación por parte de la gestión del sistema penitenciario.[77]

114. Bajo ese entendido, este Organismo Local confirma una vez más, la insuficiencia de personal penitenciario y con ello, del control efectivo de las diversas áreas en que se ha dividido el Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo, Zacatecas. En el caso concreto, se acreditan dichas deficiencias, en el área conocida como Conductas Especiales y/o Medidas Especiales y, una vez más, en el monitoreo de las cámaras de vigilancia, ubicadas en el centro. Así como en la insuficiencia de éstas en las diversas zonas en que se ha dividido en establecimiento penitenciario. Aunado a ello, se visibiliza la deficiente coordinación y comunicación prevaleciente entre el Director del Establecimiento Penitenciario y el personal de seguridad y custodia. Y se evidencian de nueva cuenta, las nulas acciones implementadas por la Dirección General de Prevención y Reinserción Social del Estado de Zacatecas, para prevenir actos que, por acción o por omisión, culminen con la pérdida de vidas humanas al interior de los centros penitenciarios a su cargo. Pese a que este Organismo Autónomo, ha emitido en los últimos años Recomendaciones derivadas de actos como el que ahora nos ocupa.

115. La falta de control efectivo del Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo, Zacatecas, denota que la seguridad a su interior es endeble y que se incumple reiteradamente, la obligación del Estado garante, de salvaguardar la vida, seguridad e integridad de los reclusos, de visitantes, e incluso del personal que ahí labora. Dicha omisión, transgrede la Regla número 1, de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas, para el Tratamiento de los Reclusos, (Reglas Mandela), que aprobó el Consejo Económico y Social Comisión de

---

75 Ídem.

76 Ídem.

77 Ídem.

Prevención del Delito y Justicia Penal, en el 24 periodo de sesiones, (Viena 18 a 22 de mayo de 2015), y que indica como imperativo improrrogable que, en los centros penitenciarios, se vele en todo momento, por la seguridad de los reclusos, del personal que ahí labore, de todos los proveedores de servicios y de los visitantes que acudan.

116. Como una prueba de lo anterior, este Organismo no puede dejar pasar por alto que, según se documentó, **VD†**, tuvo acceso de manera constante a objetos que se encuentran prohibidos en el interior del centro, así como a drogas y alcohol. Lo anterior, se desprende de las notas médicas, psicológicas y psiquiátricas que fueron descritas en el apartado de pruebas del presente instrumento. Situación que, inclusive, sucedió al momento de su muerte, pues no debemos olvidar que, de la necropsia practicada a su cadáver, se deduce que falleció por **herida por objeto cortante en cuello**; mientras que los dictámenes periciales de hematología forense, arrojaron **resultados positivos para la presencia de alcohol y metanfetaminas.**

117. Con ello, se evidencia también la falta de control efectiva del Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo, Zacatecas, detectada como ya se dijo, por este Organismo en las diversas Recomendaciones ya enlistadas; así como, en los ejercicios 2017, 2018, 2019 y el más reciente de 2020, por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a través del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria. En este último, debe precisarse, además que el Organismo Nacional señaló la deficiencia del centro en el aspecto de las **Condiciones de gobernabilidad,** debido precisamente a la **presencia de actividades ilícitas**. Por lo tanto, esta deficiencia encontrada por la Comisión Nacional, coincide con el contexto de reclusión y condiciones de muerte en las que perdió la vida **VD†**.

118. Lo anterior, hace urgente la necesidad de que la Dirección de Prevención y Reinserción Social del Estado de Zacatecas, a través de la Dirección del Centro Regional de Reinserción Social provean las condiciones para que, el personal de seguridad y custodia adscrito al centro, ejerza de manera eficaz las funciones establecidas en la Ley Nacional de Ejecución Penal; las cuales consisten en lo siguiente:

> I. Mantener recluidos y en custodia a las personas privadas de la libertad por disposición de la autoridad competente;
> II. Implementar las políticas, los programas y las estrategias establecidas en materia de seguridad y custodia penitenciaria, que para tal efecto diseñe la Autoridad Penitenciaria;
> III. Vigilar el estricto cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás disposiciones aplicables;
> IV. **Mantener el orden y disciplina de las personas privadas de la libertad**;
> V. **Preservar el orden y tranquilidad en el interior de los Centros, evitando cualquier incidente o contingencia que ponga en riesgo la integridad física de las personas privadas de la libertad, visitas y personal de los mismos;**
> VI. Revisar a las personas, objetos o vehículos que pretendan ingresar o salir de los Centros, bajo los protocolos de actuación respectivos;
> VII. **Salvaguardar la integridad de las personas** y bienes en los Centros, así como garantizar, mantener y restablecer el orden y la paz en los mismos, **utilizando para ello los protocolos aplicables, con apoyo en las herramientas, mecanismos y equipo necesarios disponibles para el cumplimiento de sus atribuciones;**
> VIII. **Efectuar revisiones periódicas en los Centros, con el objeto de prevenir la comisión de delitos con acatamiento de los protocolos y normatividad correspondientes, y**
> IX. Las demás que le confieran ésta y otras disposiciones.

119. En ese entendido, la autoridad penitenciaria deberá ordenar que, bajo la más estricta observancia de los derechos humanos, las revisiones que sean necesarias para garantizar que, situaciones como las que en el caso ocurrieron y que repercutieron en la pérdida de una vida humana, no vuelvan a repetirse. Pero, además, se deberán implementar de manera eficaz, todos y cada uno de los Protocolos establecidos en la Ley Nacional de Ejecución Penal[78], poniendo especial énfasis en los siguientes:

---

78 Ídem, art. 33. La Conferencia dictará los protocolos que serán observados en los Centros Penitenciarios. La Autoridad Penitenciaria estará obligada a cumplir con los protocolos para garantizar las condiciones de internamiento dignas y seguras para la población privada de la libertad y la seguridad y bienestar del personal y otras personas que ingresan a los Centros. La Conferencia dictará protocolos, al menos, en las siguientes materias: I. De protección civil; II. De ingreso, egreso y de las medidas necesarias para poner a la persona en libertad inmediata cuando la autoridad judicial así lo disponga y no exista otra causa para mantener a la persona privada de la libertad; 78 (Edición Vespertina) DIARIO OFICIAL Jueves 16 de junio de 2016 III. De capacitación en materia de derechos humanos para el personal del Centro; IV. De uso de la fuerza; V. De manejo de motines, evasiones, incidencias, lesiones, muertes en custodia o de cualquier otra alteración del orden interno; VI. De revisiones a visitantes y otras

- ✓ De manejo de motines, evasiones, incidencias, **lesiones, muertes en custodia** o de cualquier otra alteración del orden interno; a efecto de atender de manera puntual dichas incidencias.
- ✓ **De revisiones a visitantes y otras personas que ingresen a los Centros** asegurando el respeto a la dignidad humana y la incorporación transversal de la perspectiva de género; a fin de prevenir el ingreso de objetos y sustancias prohibidas al centro.
- ✓ De revisión de la población del Centro; a efecto de prevenir y corregir conductas que se consideren infracciones a la disciplina y, en su caso, hechos constitutivos de delitos, dando vista a la autoridad ministerial cuando ello proceda.
- ✓ De revisión del personal; con el ánimo de prevenir que éstos puedan participar de actividades ilícitas.
- ✓ Del tratamiento de adicciones; con el objetivo de prevenir que éstas, incidan de tal modo en la salud del interno que, como en el caso ocurrió, éste pueda atentar contra su vida o integridad, o la de los demás internos o el propio personal del centro.
- ✓ De prevención de agresiones sexuales y de suicidios; con la finalidad de evitar que actos como esos sucedan bajo la custodia del Estado y afecten de manera grave derechos fundamentales de los internos, de los visitantes y del personal del centro.

120. Así pues, con base en los razonamientos vertidos en los párrafos precedentes, este Organismo Estatal logró acreditar, una vez más, que la Dirección de Prevención y Reinserción Social del Estado de Zacatecas, por conducto del personal del Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo, Zacatecas, omitió garantizar el derecho a la integridad y a la vida, de **VD†**.

121. Incumpliendo así con el deber del Estado, como garante de los derechos fundamentales de las personas privadas de su libertad, primordialmente del derecho a la vida e integridad. Omisión que es ocasionada por la falta de contratación de personal suficiente, que cubra todas las áreas del centro, ocasionando con ello una deficiencia en las labores de vigilancia y seguridad. Lo que conlleva la vulnerabilidad de los internos, al no contar con las debidas garantías para la protección de sus derechos humanos, principalmente su derecho a la vida y a la integridad.

122. Consecuentemente, este Organismo Constitucional Autónomo, resuelve que, dadas las evidencias que se han abordado a lo largo del presente documento, se tiene por cierto que, al interior del Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo, Zacatecas, no se cuenta con el personal suficiente que pueda detentar el control de este. A pesar de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a través de los Diagnósticos de Supervisión Penitenciaria cuyos resultados ya se abordaron en párrafos antecedentes, ha visibilizado dicha problemática año con año. Y aun y cuando este Organismo Constitucional Autónomo, ha emitido Recomendaciones al respecto, no se han implementado las acciones necesarias para garantizar seguridad a los internos, de los visitantes y del propio personal que ahí labora; o bien, éstas han sido insuficientes, pues persisten los actos violentos como el que da origen a la presente Recomendación, y con ello la omisión de su obligación de Estado, como garante de los derechos humanos.

123. Omisión que, en el caso concreto, se actualizó en agravio de **VD†**, pues el hecho de que perdiera la vida, mientras se encontraba bajo la custodia del Estado, contraviene el deber de custodia. Deber que, según el **DR. SERGIO GARCÍA RAMÍREZ:** "*puede comprender diversas conductas, tanto activas como omisivas, que conducen a vulnerar bienes jurídicos y derechos contenidos en la Convención Americana de Derechos Humanos*"[79].

124. Finalmente, esta Comisión se pronuncia en cuanto a la obligación interna que debe sobrevenir, cuando el Estado se encuentra ante hechos en que pierde la vida una persona, máxime si dicha muerte, aconteció bajo su control y custodia. Por lo tanto, es deber indubitable de las autoridades penitenciarias, que se investigue lo conducente, para que se deslinde la responsabilidad administrativa propia del Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo,

---

personas que ingresen a los Centros asegurando el respeto a la dignidad humana y la incorporación transversal de la perspectiva de género; VII. De revisión de la población del Centro; VIII. De revisión del personal; IX. De resguardo de personas privadas de la libertad en situación de especial vulnerabilidad; X. De la ejecución de la sanción de aislamiento temporal; XI. De cadena de custodia de objetos relacionados con una probable causa penal o procedimiento de responsabilidad administrativa; XII. De trato respecto del procedimiento para su ingreso, permanencia o egreso temporal o definitivo el centro correspondiente de las hijas e hijos que vivan en los Centros con sus madres privadas de la libertad; XIII. De clasificación de áreas; XIV. De visitas y entrevistas con las personas defensoras; XV. De actuación en casos que involucren personas indígenas privadas de la libertad; XVI. Del tratamiento de adicciones; XVII. De comunicación con los servicios consulares en el caso de personas privadas de la libertad extranjeras; XVIII. De trabajo social; XIX. De prevención de agresiones sexuales y de suicidios; XX. De traslados; XXI. De solicitud de audiencias, presentación de quejas y formulación de demandas; XXII. De notificaciones, citatorios y práctica de diligencias judiciales, y XXIII. De urgencias médicas y traslado a hospitales.

79 Voto razonado concurrente del Juez Sergio García Ramírez, a la Sentencia Dictada por la Corte IDH, en el Caso Bulacio Vs. Argentina del 18 de septiembre del 2003. Párr. 8.

Zacatecas. Por lo que, en el ámbito de su competencia, la Dirección General de Prevención y Reinserción Social del Estado de Zacatecas, deberá iniciar una investigación, efectiva, profunda e imparcial, de los actores que debieron intervenir y no lo hicieron. Así como de las deficiencias sistémicas que crean los factores de riesgo para toda la población penitenciaria, y detonan en hechos lamentables, como el que es motivo de la presente Recomendación, así como colaborar en la investigación incoada por la Representación Social, dentro de la carpeta de investigación […].

125. En lo atinente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha sostenido que la determinación de responsabilidad penal o administrativa poseen, cada una, sus propias reglas sustantivas y procesales. Y que la falta de determinación de responsabilidad penal, en su caso, no debe impedir que se continúe con la averiguación de otros tipos de responsabilidades, tales como la administrativa[80].

126. Consecuentemente, debe cumplirse con la obligación que impone el artículo 1°, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se señala de manera contundente de todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, deben *de "promover, respetar, proteger y garantizar" los derechos humanos, de conformidad con los principios de "universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad",* y se establece la obligación del Estado de *"prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos".*

127. Lo anterior, implica que, todos los órganos del Estado, en el marco de las atribuciones que le son conferidas por la ley, están obligados a implementar programas encaminadas a prevenir violaciones a los derechos humanos y garantizar que sean efectivamente respetados. En el caso que nos ocupa, **VD†** perdió la vida encontrándose bajo la custodia del Estado, producto de la insuficiencia o incapacidad del personal de seguridad y custodia del Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo, Zacatecas.

128. Asimismo, dicha pérdida humana fue consecuencia de la falta de cámaras de vigilancia colocadas en todas y cada una de las áreas de dicho centro y, por ende, de personal encargado de su efectivo monitoreo. Por ello, es impostergable la investigación administrativa interna, que tienda a esclarecer la verdad de los hechos, a fin de determinar las condiciones en las cuales **VD†** perdió la vida; y, en su caso sancionar el hecho concreto. Asimismo, es imperativo que se esclarezcan de manera precisa, las necesidades del centro de reclusión que propician o facilitan las condiciones de autogobierno o cogobierno, así como los servidores públicos que, al respecto, han sido omisos, para proceder contra ellos administrativa y, en su caso, penalmente.

129. Por lo tanto, con base en los argumentos y razonamientos vertidos a lo largo de la presente Recomendación, esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, tiene debidamente demostrado que, existió omisión en la seguridad y custodia del Centro de Observación y Clasificación, del Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo, Zacatecas, en fecha 15 de mayo de 2019. Lo que trajo como consecuencia que **VD†**, persona privada de su libertad en dicho centro penitenciario, perdiera la vida, contraviniéndose así, lo mandatado en los instrumentos internacionales, interamericanos e internos, que han sido invocados a lo largo de la presente Recomendación. Y que se relacionan con el deber del Estado Mexicano, como garante de los derechos de sus gobernados y, en el caso particular, de las personas privadas de su libertad.

130. Motivo por el cual, además, el **FRANCISCO ALEJANDRO SANDOVAL CARRILLO**, Fiscal del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación Mixta número 6, del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas, deberá agotar todas las líneas de investigación dentro de la carpeta de investigación […] actualmente a su cargo. Ello, con el objetivo de que, en caso de existir un probable responsable de la muerte de **VD†**, éste sea procesado y, en su caso, sancionado penalmente por el órgano jurisdiccional correspondiente. Ya que, la investigación y sanción de los responsables, es parte fundamental del derecho de acceso a la justicia de las víctimas indirectas en los casos de violaciones a derechos humanos.

---

80 Corte IDH, *Caso Mendoza y otros* vs. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones. Sentencia de 14 de mayo de 2013. Párr. 224.

VII. DE LAS VÍCTIMAS INDIRECTAS.

El artículo 4°, párrafo segundo, de la Ley de Víctimas del Estado de Zacatecas, establece que, cuando como consecuencia de la comisión de un delito o de violaciones a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, se reconozca una víctima directa, se considerará así a los familiares o aquellas personas físicas a cargo de la víctima directa, que tengan una relación inmediata con ella; en ese entendido, considera como tal, al cónyuge, la concubina o el concubinario, las hijas e hijos de la víctima, los padres y los dependientes económicos de la víctima.

En el presente caso, esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas logró acreditar que a **VD†,** le sobrevive su señora madre, **VI4**, **VI1**, en calidad de abuela, así como sus hermanos **VI3, VI5** y **VI6**. Lo cual, se desprende de los autos de la carpeta de investigación **527/2019**, específicamente de la comparecencia de **VI3.**

De la misma manera, este Organismo acreditó el vínculo de concubinato de **VD†** y **VI2**, lo cual se deduce de la información brindada por la autoridad penitenciara, con relación a las personas que lo visitaban en el establecimiento penitenciario.

VIII. CONCLUSIONES DEL CASO.

1. Esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, reprueba la vulneración del derecho a la integridad personal y a la vida, en relación con el deber del Estado garante, respecto al presunto suicidio de **VD†**, lo cual, es atribuible a la omisión del personal de seguridad y custodia, del Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo, Zacatecas, durante la guardia comprendida de las **8:30 a las 16:30 horas del día 15 de mayo de 2019**, bajo la dirección del **LIC. ANTONIO SOLÍS VELÁZQUEZ**, entonces Director del Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo, Zacatecas.

2. Esta Comisión reprueba de manera tajante que, a pesar de que en más de una ocasión el personal de psicología y psiquiatría adscrito al Centro de Regional de Reinserción Social de Fresnillo, Zacatecas, recomendó a los distintos directores que se encontraban a cargo de éste, al **LIC. ÓSCAR GILBERTO MARTÍNEZ LIRA** y al **LIC. ANTONIO SOLÍS VELÁZQUEZ,** que se mantuviera vigilancia permanente sobre **VD†**, éstos fueron omisos en atender dichas recomendaciones.

3. Este Organismo, considera que la muerte de **VD†**, es atribuible de manera indirecta, a la Dirección de Prevención y Reinserción Social del Estado de Zacatecas, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública, en virtud de omitir la contratación de personal de seguridad y custodia, necesario para cubrir adecuadamente las guardias de 24 horas, en las diversas áreas del Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo, Zacatecas, así como la colocación de cámaras de vigilancia en todas las zonas del centro que así lo requieren.

IX. REPARACIONES.

1. De conformidad con lo establecido en los artículos 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 51 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, al acreditarse violación a los derechos humanos de **VD†**, atribuible a servidores públicos del Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo, Zacatecas, así como de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social del Estado, dependientes de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas, la Recomendación formulada al respecto, debe incluir las medidas que procedan para lograr la efectiva restitución de las personas afectadas en sus derechos.

2. Dicha reparación, de conformidad con los Principios y Directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones", adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de

diciembre de 2005, las violaciones de derechos humanos deben contemplar, de forma apropiada y proporcional a la gravedad de ésta, una reparación plena y efectiva en las formas siguientes:, restitución, rehabilitación, satisfacción, indemnización, deber de investigar y garantías de no repetición. En el caso en concreto y ante la pérdida fatal, no es posible solicitar la restitución de los derechos humanos conculcados. Las reparaciones se contemplan también en la Ley General de Víctimas, en sus artículos 1, último párrafo, 7, fracción I y II, y particularmente en el texto legal del artículo 26, que establece que "Las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera oportuna, plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva por el daño que han sufrido como consecuencia del delito o hecho victimizante que las ha afectado o de las violaciones de derechos humanos que han sufrido, comprendiendo medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y medidas de no repetición", además por lo previsto en el artículo 27 del mismo ordenamiento legal.

3. La Corte ha señalado que los familiares de las víctimas de violaciones de derechos humanos pueden ser, a su vez, víctimas. Ha considerado violado el derecho a la integridad psíquica y moral de los familiares de las víctimas por el sufrimiento causado por las violaciones perpetradas contra sus seres queridos y las posteriores actuaciones u omisiones de las autoridades estatales, por ello, es de vital importancia que las víctimas reciban la valoración médica y psicológica necesaria para determinar los daños que sufrieron como consecuencia de la vulneración a sus derechos, a través de la vulneración de los derechos de su ser querido, en este caso, a favor de la **VI4** en su calidad de madre; **VI1,** abuela, así como de sus hermanos **VI3, VI5** y **VI6**, y de **VI2** en su calidad de concubina.

A) De la indemnización.

1. La indemnización ha de concederse, de forma apropiada y proporcional a la gravedad de la violación y a las circunstancias de cada caso, por todos los perjuicios económicamente evaluables que sean consecuencia de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos o de violaciones graves del derecho internacional humanitario, tales como los siguientes:

a) El daño físico o mental;
b) La pérdida de oportunidades, en particular las de empleo, educación y prestaciones sociales;
c) Los daños materiales y la pérdida de ingresos, incluido el lucro cesante;
d) Los perjuicios morales;
e) Los gastos de asistencia jurídica o de expertos, medicamentos y servicios médicos y servicios psicológicos y sociales.[81]

2. En el presente punto, debido al fallecimiento de **VD†**, la indemnización se realizaría a favor de las víctimas indirectas, que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 4 fracción I y II, de la Ley de Atención a Víctimas del Estado de Zacatecas, correspondería a la **VI4** en su calidad de madre; **VI1**, abuela, así como de sus hermanos **VI3, VI5** y **VI6**, y de **VI2** en su calidad de concubina; para que, en su caso, sean beneficiarios del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, para que sea cuantificado lo previsto en los incisos d) y e), relativos a los perjuicios morales, los gastos de asistencia jurídica y servicios psicológicos requeridos para la aceptación de la pérdida.

B) De la rehabilitación.

1. La presente reparación debe "incluir la atención médica y psicológica, así como servicios jurídicos y sociales."[82], en ese contexto, las medidas de rehabilitación buscan reducir los padecimientos físicos y psicológicos de las víctimas, a través del otorgamiento de servicios de atención médica, psicológica, jurídica y social que éstas requieran.

2. Por lo tanto, si bien, el señor **VD†**, como víctima por omisión de la autoridad penitenciaria, no puede recibir atención, deberá brindarse la atención psicológica a sus familiares, por la afectación emocional que pudiera haber causado su deceso.

---

81 Ídem, párr. 20.

82 Ídem, párr. 21.

C) De las medidas de satisfacción.
1. La satisfacción cuando sea pertinente y procedente deberá incluir la totalidad o parte de las medidas siguientes:

> **a) Medidas eficaces para conseguir que no continúen las violaciones;**
> b) La verificación de los hechos y la revelación pública y completa de la verdad, en la medida en que esa revelación no provoque más daños o amenace la seguridad y los intereses de la víctima, de sus familiares, de los testigos o de personas que han intervenido para ayudar a la víctima o impedir que se produzcan nuevas violaciones;
> c) La búsqueda de las personas desaparecidas, de las identidades de los niños secuestrados y de los cadáveres de las personas asesinadas, y la ayuda para recuperarlos, identificarlos y volver a inhumarlos según el deseo explícito o presunto de la víctima o las prácticas culturales de su familia y comunidad;
> d) Una declaración oficial o decisión judicial que restablezca la dignidad, la reputación y los derechos de la víctima y de las personas estrechamente vinculadas a ella;
> e) Una disculpa pública que incluya el reconocimiento de los hechos y la aceptación de responsabilidades;
> f) **La aplicación de sanciones judiciales o administrativas a los responsables de las violaciones**;
> g) Conmemoraciones y homenajes a las víctimas;
> h) **La inclusión de una exposición precisa de las violaciones ocurridas en la enseñanza de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, así como en el material didáctico a todos los niveles**.[83]

2. En relación a la presente reparación, resultan pertinentes y procedentes, las señaladas en los incisos a), f) y h), esto es, que como medidas eficaces para conseguir que no continúen este tipo de violaciones por omisión, deberá capacitarse al personal de seguridad y custodia del Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo, Zacatecas, para que se sujete a los protocolos que permitan realizar rondines con mayor frecuencia a los internos, como medida de detectar y evitar eventos suicidas, como el que aparentemente aconteció con **VD†.**

3. Asimismo, se inicien los procedimientos administrativos en contra de los servidores públicos que incurrieron en dicha omisión, por las violaciones al derecho a la integridad y a la vida de las personas privadas de su libertad.

D) De las garantías de no repetición.
1. A fin de prevenir la violación de los derechos mencionados en párrafos precedentes, resulta indispensable que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, conjuntamente con la Dirección de Prevención y Reinserción Social, el Director, Jefes o Encargados de Establecimientos Penitenciarios, realicen los trámites correspondientes ante las instancias respectivas, a efecto de obtener y contar con los recursos mínimos indispensables, suficientes y eficaces, para el debido funcionamiento del Sistema Penitenciario, como son: personal técnico, administrativo, profesional y penitenciario suficiente para cubrir todos los servicios y horarios; y con ello, cumplir con su obligación de Estado garante de la integridad física y la vida de los internos que están bajo su custodia.

2. Igualmente, es indispensable la educación en materia de respeto, protección y garantía de los derechos humanos por parte de los servidores públicos involucrados, por lo que, para ello es obligación de dichos funcionarios, la observancia de las normas de derecho internacional, las disposiciones legales nacionales, locales y reglamentarias aplicables.

3. Por lo anterior, deberán implementarse programas de capacitación dirigidos al personal penitenciario de seguridad y custodia, así como del área médica y psicológica en materia de derechos humanos, que les permitan identificar las acciones u omisiones que vulneran los citados derechos en perjuicio de las personas privadas de libertad, a fin de incidir en la erradicación de éstas.

---

83 Ídem, párr. 22.

X. RECOMENDACIONES.

Por todo lo anteriormente expuesto, y con fundamento en los 1 y 102 apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 2, 3, 4, 8, 17, 37, 51, 53, 54, 56, 57 y 58 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas se emiten las siguientes Recomendaciones:

PRIMERA. En el plazo máximo de un mes, contado a partir de la notificación de la presente Recomendación, se inscriba en el Registro Estatal de Víctimas a **VD†,** como víctima directa de violaciones a sus derechos humanos, por parte de las autoridades penitenciarias del Centro Regional de Reinserción Social de Frenillo, Zacatecas. Así como a sus víctimas indirectas, la **VI4** en su calidad de madre; **VI1**, abuela, así como de sus hermanos **VI3, VI5** y **VI6**, y de la **VI2** en su calidad de concubina. Lo anterior, a efecto de que, en un plazo máximo de un año, contado a partir de la notificación de la presente Recomendación, se garantice su acceso oportuno al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, previsto en la Ley de Atención a Víctimas del Estado de Zacatecas, para que se realice la indemnización correspondiente, conforme a los parámetros establecidos en el apartado anterior. Debiendo remitir a este Organismo las constancias con que acrediten su cumplimiento.

SEGUNDA. En un plazo máximo de un mes, contado a partir de la aceptación de la presente Recomendación, se valore y determine si las víctimas indirectas de **VD†,** requieren atención psicológica especializada en tanatología, por los posibles daños emocionales que les pudo haber causado el deceso de la víctima directa**.** Y de ser el caso, en el plazo máximo de un mes, posterior a la realización de dicha valoración, se realicen las gestiones necesarias para que si éstas, así lo deciden, inicien su tratamiento, el cual les deberá ser proporcionado hasta que éstas logren su total restablecimiento emocional. Debiendo remitir a este Organismo las constancias con que acrediten su cumplimiento.

TERCERA. En un plazo máximo de un mes, contado a partir de la aceptación de la presente Recomendación, se realicen las gestiones necesarias ante el área correspondiente, a fin de que se dote de los dispositivos necesarios de videograbación, que cubran todas las áreas del Centro Regional de Reinserción Social del Estado de Zacatecas, con el objetivo de impactar de manera adecuada, en la vigilancia de los internos, debiendo enviarse a este Organismo, las constancias de cumplimiento.

CUARTA. En un plazo máximo de un mes, contado a partir de la aceptación de la presente Recomendación, se realicen las gestiones necesarias ante el área correspondiente, para la implementación de los protocolos: de revisiones a visitantes y otras personas que ingresen a los Centros asegurando el respeto a la dignidad humana y la incorporación transversal de la perspectiva de género; de revisión de la población del Centro; de revisión del personal; del tratamiento de adicciones; de prevención de agresiones sexuales y de suicidios; de resguardo de personas privadas de la libertad en situación de especial vulnerabilidad; de la ejecución de la sanción de aislamiento temporal; todos, establecidos en el artículo 33 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Debiendo enviar a este Organismo, las constancias de cumplimiento. Lo anterior, a fin de brindar un manejo correcto y eficaz de las personas privadas que, como en el presente caso, requieran tratamientos para la adicción al alcohol y drogas, así como atención psiquiátrica especializada. Así como para evitar que se introduzcan en las instalaciones del Centro Penitenciario, objetos con los que las personas privadas de su libertad puedan atentar contra su vida.

QUINTA. En un plazo máximo de un mes, contado a partir de la aceptación de la presente Recomendación, se acredite la capacitación del personal de seguridad y custodia y de la Policía Penitenciaria, adscritos al Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo, Zacatecas, a fin de que realicen de manera eficaz la vigilancia, cuidado y atención de las personas privadas de su libertad, salvaguardando ante todo, el respeto, protección y garantía de los derechos humanos a la vida e integridad personal de éstos; haciéndose énfasis en el

carácter social de la función que desempeñan, así como en el concepto de seguridad dinámica, debiendo enviarse a este Organismo, las constancias de cumplimiento.

SEXTA. En un plazo máximo de dos meses, contados a partir de la aceptación de la presente Recomendación, se inicien los procedimientos de responsabilidad correspondientes, a fin de que las y los servidores públicos responsables de las violaciones a los derechos humanos señalados, sean debidamente sancionados; debiendo enviarse a este Organismo, las constancias de cumplimiento.

SÉPTIMA. En un plazo máximo de dos meses, se implemente, por la Dirección del Centro Regional de Reinserción Social, un programa constante de supervisión interna, que tenga como finalidad garantizar la seguridad de los internos, de los visitantes y del personal que ahí labora, así como brindar los servicios indispensables para satisfacer las necesidades básicas de los internos, con énfasis en el concepto de seguridad dinámica, caracterizado por una estrecha interacción entre el personal, (que deberá estar debidamente capacitado), y los internos; la supervisión indirecta, o una combinación de ambas modalidades, procurando en consecuencia que, el personal, sea suficientemente numeroso y mantenga una proximidad suficiente para garantizar la seguridad de todos los detenidos presentes en el área de alojamiento de que se trate, durante las 24 horas del día debiendo enviarse a este Organismo, las constancias de cumplimiento.

OCTAVA. En un plazo máximo de seis meses, contados a partir de la presente Recomendación, se realicen los trámites correspondientes, ante las instancias competentes, a efecto de contar con el personal técnico, administrativo y profesional mínimo indispensable, para garantizar de manera eficiente y eficaz, el funcionamiento de las diferentes áreas del Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo, Zacatecas. Así como, con el óptimo funcionamiento de las cámaras de videovigilancia existentes, incrementando el número de éstas, en las áreas que ameritan mayor monitoreo dentro del centro penitenciario, procurando además su constante monitoreo, sin que la persona asignada a ello se ocupe de otras tareas durante su encargo, debiendo enviarse a este Organismo, las constancias de cumplimiento.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 53, párrafo segundo de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, se hace del conocimiento de la autoridad a la que va dirigida esta Recomendación, que dispone de un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente en que ésta se le notifique, para que manifieste si la acepta o no, en el entendido de que, de no aceptarla, su respuesta se hará del conocimiento de la opinión pública. En caso de que la acepte, se le notifica que dispone de un plazo de 15 días, contados a partir del vencimiento del término del que disponía para responder sobre la aceptación, a fin de enviar las pruebas de su cumplimiento.

Por último, hágasele saber a la quejosa que, de conformidad con el artículo 61 de la Ley de este Organismo, disponen de 30 días naturales, computados a partir de la fecha de notificación del presente documento, para que en caso de que exista inconformidad con la misma, interpongan el recurso de impugnación correspondiente ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Así lo determina y firma

DRA. EN D. MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOS
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE ZACATECAS

Expediente: CDHEZ/177/2020

Tipo de queja: Oficiosa.

Persona agraviada: V1+

Autoridades responsables:
a) Director y personal de Guardia y Custodia del Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas.

Derecho humano vulnerado:
I. Derecho a la vida, en relación con el deber del estado garante de las personas privadas de su libertad.

Zacatecas, Zacatecas, a 20 de julio de 2021, una vez concluida la investigación de los hechos que motivaron el expediente **CDHEZ/177/2020,** y analizado el proyecto presentado por la Cuarta Visitaduría de Zacatecas, la suscrita aprobó, de conformidad con los artículos 4, 8 fracción VIII, 17 fracción V, 37, 51, 53 y 56 de la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, en relación con lo dispuesto por los numerales 27, fracción VIII, 40 fracción V, 161, fracción X, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 y 175 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, la **Recomendación 36/2021** que se dirige a la autoridad siguiente:

MAESTRO ARTURO LÓPEZ BAZAN, Secretario de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas.

R E S U L T A N D O:

I. DE LA CONFIDENCIALIDAD.

1. De conformidad con los artículos 6°, apartado A, fracción II y 16, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 23 y 85 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, los datos personales de los peticionarios y los agraviados, relacionado con esta resolución, permanecerán confidenciales, ya que estos no son públicos.

2. Asimismo, en términos de lo dispuesto por los artículos 4°, párrafo sexto, 6° fracción II, y 16 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 16 de la Convención de los Derechos del Niño, los nombres, apellidos y demás datos personales de niñas y niños vinculados con los hechos de la presente resolución, se mantienen bajo la misma estricta confidencialidad, en pleno respeto a su derecho a la intimidad y vida privada.

II. RELATORÍA DE LOS HECHOS Y OBJETO DE LA CONTROVERSIA.

1. El 30 de marzo de 2020, se emitió acuerdo de admisión de queja oficiosa a favor de **V1+**, de conformidad con los artículos 30, 31 y 32 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas; queja iniciada en contra del Director y Personal de la Policía Penitenciaria del Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas, por actos presuntamente violatorios de derechos humanos, derivadas de las notas periodísticas publicadas en fecha 30 de marzo de 2020, en "**La Jornada Zacatecas",** bajo el título **"Encuentran sin vida en penal de Cieneguillas a presunto homicida de activista";** "**Imagen de Zacatecas",** con el título **"Se suicida presunto asesino de activista";** "**El Sol de Zacatecas",** con el título **"Presunto asesino de activista, se suicidó"**.

Por razón de turno, el 31 de marzo de 2020, se radicó formal queja en la Cuarta Visitaduría General, bajo el número de expediente citado al rubro, a efecto de formular el acuerdo de calificación correspondiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 123 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas.

El 31 de marzo de 2020, la queja se calificó como presunta violación al derecho a la vida, en relación con el deber del estado garante de las personas privadas de su libertad, de conformidad con lo establecido en el artículo 124, fracción I, del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas.

2. Los hechos materia de la queja consistieron en lo siguiente:
El 29 de marzo de 2020 fue localizado sin vida un recluso de 25 años de edad, al interior de una celda del Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas. Razón por la cual, esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, dio inicio a queja oficiosa, derivado de las notas periodísticas publicadas en fecha 30 de marzo de 2020, en "**La Jornada Zacatecas",** bajo el título **"Encuentran sin vida en penal de Cieneguillas a presunto homicida de activista";** "**Imagen de Zacatecas",** con el título **"Se suicida presunto asesino de activista";** "**El Sol de Zacatecas",** con el título **"Presunto asesino de activista, se suicidó"**.

3. Informe rendido por la autoridad:
El 06 de abril de 2020, se recibió en este Organismo, el informe de autoridad emitido por el **GENERAL DE BRIGADA RETIRADO IGNACIO LÓPEZ FLORES,** entonces Director del Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas.

III. COMPETENCIA.

1. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas es competente, en los términos de los artículos 1º, 4º, 6º, 8º fracción VII, inciso A) y 31 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, en relación con los numerales 15, 22 y 23 de su Reglamento Interno, en razón de que la queja se promueve en contra de servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas.

2. De conformidad con los artículos 123 y 124, fracción I del Reglamento Interior de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, este Organismo advierte que, los hechos pudieran constituir una presunta violación a los derechos humanos de **V1+,** así como una probable responsabilidad por parte de los servidores públicos señalados.

3. Esta Comisión presumió la violación del siguiente derecho:

a) Derecho a la vida, en relación con el deber del estado garante de las personas privadas de su libertad.

IV. PROCEDIMIENTO ANTE LA COMISIÓN.

Con la finalidad de documentar las presuntas violaciones a derechos humanos, así como para determinar la existencia o no de responsabilidad por parte de los servidores públicos señalados, este Organismo realizó consulta de notas periodísticas; se recabaron comparecencias de personal adscrito al Centro Regional de Reinserción social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas; se solicitaron informes a las autoridades señaladas como responsables, así como informes en vía de colaboración y se consultó la carpeta de investigación relacionada con los hechos motivo de queja.

V. PRUEBAS.

Con base en lo estipulado en los artículos 48 y 49 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, en relación con los numerales 150, 151, 152, 153 y 154 del Reglamento Interior de este Organismo, durante el procedimiento realizado por esta

Institución, se recabaron los elementos probatorios documentales, remitidos tanto por la parte agraviada como por las autoridades señaladas como responsables necesarios para emitir la resolución correspondiente.

VI. SOBRE LOS DERECHOS VULNERADOS.

Violación a los derechos de las personas privadas de su libertad, en su modalidad de la obligación del Estado de salvaguardar la vida.

1. Previo al análisis de los hechos que motivaron la presente Recomendación, esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, hace hincapié en el deber del Estado, como garante de los derechos humanos de las personas, primordialmente, de los grupos en situación de vulnerabilidad, como es el caso de las personas privadas de su libertad. Recordando además que, dicho deber, tiene como base principal el reconocimiento de la dignidad inherente al ser humano, por lo que el pleno respeto a los derechos humanos de todas las personas, debe regirse bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, conforme lo dispuesto por el artículo 1°, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2. Bajo ese entendido, es posible afirmar que, el irrestricto respeto a la dignidad humana constituye un límite a la actividad estatal, válido para todo órgano o funcionario que se encuentre en una situación de poder frente a las personas. Así, en caso de que el Estado prive de manera legal a una persona de su libertad, asume una responsabilidad especial, relacionada con el respeto y la garantía de sus derechos humanos; ya que, tanto la seguridad, como la integridad de éstas, quedan bajo su custodia.

I) Obligación del Estado de salvaguardar la vida, de las personas privadas de su libertad.

3. El derecho a la vida, es un derecho fundamental, sin el cual es imposible garantizar el goce de otros derechos o libertades, los cuales carecerían de sentido en virtud de la desaparición de la persona titular del derecho; siendo la vida inherente a todas las personas, a las cuales se les debe garantizar el respeto de la misma, e implica que nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.[1]

4. El Estado tiene obligaciones de carácter positivo (de hacer) y negativo (de no hacer) en relación al derecho a la vida, ya que tiene el deber de respetarla, lo cual implica que ninguna persona sea privada de su vida arbitrariamente; además las obligaciones positivas de proteger y garantizar este derecho, lo obliga a que se tomen todas las medidas apropiadas para protegerla y preservarla garantizando el pleno y libre ejercicio de los derechos de todas las personas dentro de su jurisdicción.[2]

5. El derecho en cuestión constituye un derecho básico y primario del que goza toda persona desde su existencia. En ese sentido, el artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, señala que, "[t]odo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona".[3] De ahí que, la obligación de cuidar el efectivo respeto y garantía de los derechos humanos, corresponde al Estado, como ente garante de los mismos. En el mismo tenor, el artículo 6.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos señala que, "[e]l derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por la ley." [4]

6. Los artículos 1.1 y 4.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establecen, respectivamente, que, "[l]os Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar

---

1 Declaración Universal de Derechos Humano, artículo 3; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 6.1; Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, artículo 1; Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 4.

2 Corte IDH. Caso Myrna Mack Chang Vs. Guatemala. Fondo. Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre del 2003, párr. 153. Consultado en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_101_esp.pdf., en fecha 14 de abril de 2021.

3 Declaración Universal de Derechos Humanos, consultado en: http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/, en fecha 14 de abril de 2020.

4 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, consultado en: https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/ccpr.aspx, en fecha 14 de abril de 2020.

los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna […]".[5] Por lo que, "[t]oda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción."[6]

7. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el Caso de las Masacres de Ituango Vs. Colombia, puntualizó que, "el cumplimiento de las obligaciones impuestas por el artículo 4 de la Convención Americana, relacionado con el artículo 1.1 de la misma, no sólo presupone que ninguna persona sea privada de su vida arbitrariamente (obligación negativa), sino que además requiere, a la luz de su obligación de garantizar el pleno y libre ejercicio de los derechos humanos, que los Estados adopten todas las medidas apropiadas para proteger y preservar el derecho a la vida (obligación positiva) de quienes se encuentren bajo su jurisdicción".[7]

8. Asimismo, en el "Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa vs. Paraguay", la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estableció que, "[e]l derecho a la vida es un derecho humano fundamental, cuyo goce pleno es un prerrequisito para el disfrute de todos los demás derechos humanos. De no ser respetado, todos los derechos carecen de sentido."[8]

9. En relación al derecho que se examina, "el Estado se encuentra en una posición especial de garante, según la cual su deber de protección de este derecho es aún mayor"[9] y se debe asegurar de proporcionar condiciones mínimas que sean compatibles con la dignidad humana,[10] teniendo el "deber de prevenir todas aquellas situaciones que pudieran conducir, tanto por acción, como por omisión, a la supresión de este derecho".[11]

10. En este sentido cuando una persona es detenida en un estado de salud óptimo o en condiciones en las que el estado de salud en el que se encuentra no implique un riesgo inminente a su vida, y posteriormente muere por causas distintas, como es el suicidio, o el descuido de la persona que se encuentra bajo su resguardo, la obligación de proveer una explicación satisfactoria sobre lo sucedido recae sobre el Estado, ya que existe una presunción de responsabilidad estatal en relación a lo que le suceda a una persona en tanto esté bajo su custodia,[12] en atención a que el Estado, como responsable de los establecimientos de detención, es el garante de los derechos de las personas detenidas que se encuentran bajo su jurisdicción.

11. Es pertinente mencionar que la muerte de personas privadas de libertad en los centros de reclusión o espacios de detención temporal, en muchas ocasiones, se producen como resultado de la falta de prevención y de adopción de las medidas adecuadas para mitigar la amenaza.[13]

12. Por lo que, de acuerdo a las obligaciones descritas, los servidores públicos por razones de su cargo de custodia, vigilancia, protección y seguridad de las personas, deben cumplir

---

5 Convención Americana sobre Derechos Humanos, consultado en: https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm, en fecha 14 de abril de 2021.
6 *Ídem.*
7 Corte IDH. Caso de las Masacres de Ituango Vs. Colombia. Sentencia de 1 de julio de 2006, párr. 130
8 Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Sentencia de 29 de marzo de 2006. Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 150.
9 CIDH, Informe sobre los derechos humanos de las personas privadas de libertad en las Américas. OEA, aprobado por la CIDH el 31 de diciembre de 2011, párr. 270. Consultado en: https://www.oas.org/es/cidh/ppl/docs/pdf/ppl2011esp.pdf, en fecha 14 de abril de 2021.
10 CIDH. Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, aprobado por la CIDH en su Resolución 1/08 en su 131 Período Ordinario de Sesiones, principio I; CIDH. Caso López Álvarez Vs. Honduras. Sentencia de 1º. De febrero del 2006, Serie C No. 141, párr. 106; y Caso Instituto de Reeducación del Menor Vs. Paraguay. Sentencia de 2 de septiembre del 2004, Serie C. No. 112, párr. 159
11 CIDH. Informe sobre los derechos humanos de las personas privadas de libertad en las Américas. OEA. Aprobado por la CIDH el 31 de diciembre de 2011. Párr. 270. Consultado en: https://www.oas.org/es/cidh/ppl/docs/pdf/ppl2011esp.pdf, en fecha 14 de abril de 2021.
12 CIDH. Informe sobre los derechos humanos de las personas privadas de libertad en las Américas. OEA, aprobado por la CIDH el 31 de diciembre de 2011, párr. 270; Corte IDH. Caso Cárcel de Urso Branco respecto Brasil. Medidas Provisionales. Resolución de 18 de junio de 2002. Considerando 8; European Court of Human Rights, Case of Salman V. Turkey, Application 21986/93, Judgment of June 27, 2000.
13 CIDH. Informe sobre los derechos humanos de las personas privadas de libertad en las Américas. OEA, aprobado por la CIDH el 31 de diciembre de 2011, párr. 285. Consultado en: https://www.oas.org/es/cidh/ppl/docs/pdf/ppl2011esp.pdf, en fecha 14 de abril de 2021.

con la encomienda derivada de la ley, para evitar que se provocara un daño a la persona agraviada, ya que no lo previeron, con lo cual se violentó el deber de cuidado que objetivamente era necesario que observaran.

13. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que el Estado en virtud de su deber de garante de las personas privadas de la libertad "debe prestar atención prioritaria a la prevención del suicidio, lo que implica reducir al máximo los posibles factores de riesgo."[14] En este sentido algunas de las medidas que el Estado debe realizar con la finalidad de garantizar la integridad personal y la vida de las personas privadas de la libertad, derivadas de la lectura integral de los artículos 1.1, 4.1 y 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, son las siguientes[15].

> a) Practicar un examen médico inicial a toda persona que ingresa en un centro de reclusión, en el cual se debe observar si la persona privada de la libertad representa un peligro para sí misma. Los centros de reclusión deben tener un programa de prevención de suicidios.
> b) Entrenamiento adecuado del personal […] (de salud y de custodia) en la detención y tratamiento de posibles casos de suicidio;
> c) Establecimiento de políticas y procedimientos claramente articulados para la supervisión continua y el tratamiento de las personas internas que se consideran están en riesgo de suicidarse;
> d) Mantenimiento de un entorno físico seguro que reduzca las posibilidades de emplear mecanismos para el suicidio; en el que, por ejemplo, se eliminen o reduzcan los puntos de colgamiento y el acceso de las personas privadas de la libertad a materiales letales; y en el que se adopten medios de vigilancia eficientes.

14. En el que se investiga, esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, encontró que, personal del Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas, incurrió en omisiones que vulneraron los derechos humanos de **V1+**, cuando éste perdió la vida al interior de las instalaciones del referido centro penitenciario, donde se encontraba detenido.

15. Así pues, el Estado, en su posición de garante, está obligado a adoptar las medidas necesarias para proteger y garantizar el derecho a la vida de las personas recluidas. Por lo cual, deberá implementar las medidas preventivas necesarias para evitar que, por acción u omisión, se suprima este derecho. En este sentido, la Corte Interamericana ha determinado que, en virtud de que las personas privadas de su libertad se encuentran bajo custodia y control total de las autoridades penitenciarias, su situación de vulnerabilidad se incrementa, surgiendo en consecuencia un deber especial del Estado frente a ellas; siendo el principal responsable de garantizar sus derechos humanos, entre ellos, el más importante; la vida.[16]

16. En base a lo anterior, se concluye que las autoridades estatales están obligadas a realizar todas aquellas acciones necesarias para preservar la vida de las personas bajo su custodia, así como para evitar violaciones a sus derechos humanos; inclusive, cuando el daño es provocado por la misma persona privada de su libertad, y de esta manera, reducir las situaciones que ponen en riesgo su vida, pues tal y como se precisó con antelación, el derecho a la vida constituye un derecho humano fundamental para garantizar el ejercicio de otros derechos. Motivo por el cual, en el caso específico de las personas privadas de su libertad, el Estado adopta una posición especial de garante, que se traduce en el deber de respeto y garantía de los mismos.

---

14 CIDH. Informe sobre los derechos humanos de las personas privadas de la libertad en las Américas. OEA, aprobado por la CIDH el 31 de diciembre de 2011, párr. 321. Consultado en: https://www.oas.org/es/cidh/ppl/docs/pdf/ppl2011esp.pdf, en fecha 14 de abril de 2021.
15 CIDH. Informe sobre los derechos humanos de las personas privadas de libertad en las Américas. OEA, aprobado por la CIDH el 31 de diciembre de 2011, párr. 321; Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las personas privadas de libertad en las Américas, aprobado por la CIDH en su 131 período ordinario de sesiones, celebrado del 3 al 14 de marzo del 2008, principio IX.3; Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de las Personas Privadas de Libertad; adoptada por la Asamblea General de la ONU en su resolución 45/113 de 14 de diciembre de 1990, regla 50; Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión, adoptado por la Asamblea General de la ONU en su resolución 43/173 de 9 de diciembre de 1988, principio 24, 25, 34; Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos, aprobados por el Congreso Económico y Social en sus resoluciones 663 del 31 de julio de 1957 y 2076 del 13 de mayo de 1977, reglas 7, 24, 84 – 93.
16 Corte IDH. Caso Espinoza vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2014. Serie C. No. 289, párr. 205

II) Derechos de las personas privadas de su libertad.

17. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, precisa en su artículo 5.2, que "[t]oda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano."[17] Incluso, la Comisión Interamericana otorga especial atención a la situación de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad física, ya que, el hecho de que tales personas se encuentren en una situación de especial vulnerabilidad, asociado a la frecuente falta de políticas públicas al respecto, que otorguen la prioridad que el tema merece, implica frecuentemente que, las condiciones de las personas privadas de su libertad se caractericen por la violación sistemática de sus derechos humanos.[18]

18. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha establecido con respecto de la obligación del Estado como garante de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, que "[e]n los términos del artículo 5.2 de la Convención toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal y el Estado debe garantizarle el derecho a la vida y a la integridad personal. En consecuencia, el Estado, como responsable de los establecimientos de detención, es el garante de estos derechos de los detenidos."[19] Además, ha detallado que "de las obligaciones generales de respetar y garantizar los derechos, derivan deberes especiales, determinables en función de las particulares necesidades de protección del sujeto de derecho, ya sea por su condición personal o por la situación específica en que se encuentre."[20]

19. En el mismo tenor, este Organismo Internacional ha establecido que "[f]rente a las personas privadas de libertad, el Estado se encuentra en una posición especial de garante, toda vez que las autoridades ejercen un fuerte control o dominio sobre las personas que se encuentran sujetas a su custodia. De este modo, se produce una relación e interacción especial de sujeción entre la persona privada de libertad y el Estado, caracterizada por la particular intensidad con que el Estado puede regular sus derechos y obligaciones y por las circunstancias propias del encierro, en donde al recluso se le impide satisfacer por cuenta propia una serie de necesidades básicas que son esenciales para el desarrollo de una vida digna."[21]

20. Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, determinó en el caso Instituto de Reeducación del Menor[22] que, la garantía de esos derechos corresponde al Estado, ya que la persona privada de la libertad se encuentra bajo su sujeción y la compurgación de su pena, debe limitarse a la restricción del derecho a la libertad, no anular su titularidad respecto a los diversos derechos humanos que le asisten. Es decir, al privarse de la libertad a una persona, el Estado coloca a ésta en una institucionalización total, ya que al permanecer en un centro de reclusión los diversos aspectos de su vida se someten a una regulación y control absoluto que, entre otros aspectos, disminuyen radicalmente las posibilidades de autoprotección.

21. En este orden de ideas, la Corte Interamericana también se ha pronunciado en cuanto a que, toda restricción a los derechos humanos de las personas privadas de su libertad, debe demostrar fehacientemente la necesidad de ésta y regular rigurosamente la limitación de que serán objeto. Asimismo, ha establecido que existen derechos -como la vida, la integridad, el debido proceso, entre otros-, cuya limitación o restricción está prohibida; ya que, toda persona privada de su libertad tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal y el Estado debe garantizarle el derecho a la vida y a la integridad

---

17 Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto de San José). Consultado en: http://www.oas.org/dil/esp/tratados_b32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm, en fecha 15 de abril de 2021.
18 Segundo Informe sobre los Derechos Humanos en el Perú. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cap. IX, párr.1. Consultado en: https://www.cidh.oas.org/countryrep/Peru2000sp/capitulo9.htm, en fecha 15 de abril de 2021
19 Corte IDH. Caso Neira Alegría y otros Vs. Perú. Sentencia de 19 de enero de 1995. Fondo. Párr. 60. consultado en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_20_esp.pdf, en fecha 15 de abril de 2021.
20 Corte IDH. Caso Vélez Loor Vs. Panamá. Sentencia de 23 de noviembre de 2010. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Párr. 98 Consultado en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_218_esp2.pdf, en fecha 15 de abril de 2020.
21 Corte IDH. Caso Instituto de Reeducación del Menor Vs. Paraguay. Sentencia de 02 de septiembre de 2004. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Párr.152. Consultado en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_112_esp.pdf, en fecha 15 de abril de 2021.
22 *Ídem*.

personal. En consecuencia, el Estado como responsable de los establecimientos de detención, es el garante de estos derechos de los detenidos.[23]

22. De ahí que, cuando el Estado priva de la libertad a una persona, asume una responsabilidad especial relacionada con el respeto y la garantía de sus derechos; ya que, tanto la seguridad como la integridad de éstas, queda bajo su custodia. Por ello, uno de los principales deberes del Estado consiste en ejercer un control efectivo sobre la seguridad interna de los centros de detención a su cargo. Pues en la medida en que sea capaz de garantizar dicho aspecto, podrá garantizar los derechos humanos de las personas privadas de su libertad.[24] Si el Estado es incapaz de mantener el orden y seguridad al interior de los centros de detención, será incapaz de cumplir con el objetivo esencial de la pena privativa de libertad; la reforma y la readaptación social de las internas y los internos.

23. Tocante a ello, el Comité de Derechos Humanos, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas[25] ha establecido que, el trato humano y el respeto de la dignidad de las personas privadas de su libertad, es una norma de aplicación universal, que no depende de los recursos materiales del Estado. En el mismo sentido, los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas[26], reconocen que todas las personas privadas de su libertad que estén sujetas a la jurisdicción del Estado deberán ser tratadas humanamente, con irrestricto respeto a su dignidad, derechos y garantías fundamentales. Dicha garantía se encuentra salvaguardada también en el Sistema universal, a través del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,[27] que consagra de manera expresa el principio de trato humano, como eje fundamental de las normas aplicables a las personas privadas de su libertad.

24. En esa tesitura, resulta ineludible que los Estados ejerzan un control efectivo de los centros de detención o penitenciarios, a fin de garantizar en todo momento la seguridad de las personas privadas de su libertad, sus familias y de los propios trabajadores que ahí laboran. Pues, de lo contrario, se generarían situaciones que pongan en riesgo no sólo la integridad, sino la propia vida de éstas. Transgrediéndose así, una de las principales obligaciones para los Estados en materia de derechos humanos, que es la de garantizar la protección de estos derechos.

25. Según lo disponen los ordenamientos jurídicos precitados, el Estado, en su posición garante, está obligado a adoptar las medidas necesarias para proteger y garantizar el derecho a la vida de las personas recluidas. Por lo cual, deberá implementar las medidas preventivas necesarias para evitar que, por acción u omisión, se suprima este derecho. En este sentido, la Corte Interamericana ha determinado que, en virtud de que las personas privadas de su libertad se encuentran bajo custodia y control total de las autoridades correspondientes, su situación de vulnerabilidad se incrementa, surgiendo en consecuencia un deber especial del Estado frente a ellas; siendo el principal responsable de garantizar sus derechos humanos, entre ellos, el más importante, la vida.[28]

26. En tales circunstancias, los casos de muertes ocurridas en custodia del Estado, incluyendo las muertes naturales y suicidios, deberán ser investigados de manera imparcial y objetiva, a fin de determinar el grado de responsabilidad en que el Estado incurrió; de este modo, éste tiene la obligación de garantizar y proteger el derecho a la vida. Para ello, la Corte Interamericana ha establecido a través del caso Familia Barrios vs. Venezuela que la

---

23 Corte IDH. Caso Neira Alegría y otros vs. Perú. Sentencia de 29 de enero de 1995. Fondo. Párr. 60. Consultada en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_20_esp.pdf, en fecha 15 de abril de 2021.
24 Comisión IDH. Informe sobre los derechos humanos de las personas privadas de libertad en la Américas, aprobado el 31 de diciembre de 2011. Págs. 3-6. Consultado en: https://www.oas.org/es/cidh/ppl/docs/pdf/ppl2011esp.pdf, en fecha 15 de abril de 2021.
25 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Los derechos humanos y las prisiones. Manual de capacitación en derechos humanos para funcionarios de prisiones. 2004. Consultado en: https://www.ohchr.org/Documents/Publications/training11sp.pdf, el 15 de abril de 2021.
26 Comisión IDH. Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de la Libertad en las Américas. Consultado en: http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/PrincipiosPPL.asp, el 15 de abril de 2021.
27 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 16 de diciembre de 1966. Artículo 10.1. Consultado en: https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx, el 15 de abril de 2021.
28 Corte IDH. Caso Espinoza vs. Perú. Sentencia de 20 de noviembre de 2014. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Párr. 205. Consultado en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_289_esp.pdf, en fecha 16 de abril de 2021.

obligación del Estado de proteger y garantizar el derecho a la vida “no sólo presupone que ninguna persona sea privada de su vida arbitrariamente, (…) sino que además requiere que los Estados adopten todas las medidas apropiadas para proteger y preservar el derecho a la vida”.[29] En consecuencia, el Estado está obligado a mantener el control en los centros de detención, con estricto apego al respeto de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad.

27. Concretamente, la Corte ha determinado que, las medidas que el Estado debe adoptar para proteger y garantizar el derecho a la vida de las personas privadas de la libertad, abarcan desde aquéllas que favorecen la conservación de un clima de respeto a los derechos humanos hasta aquellas dirigidas a proteger a los internos o detenidos, de los hechos que puedan suscitarse con ellos. Ya que, dichos actos de falta de cuidado, representan una situación de riesgo inminente tanto para la vida de las personas detenidas, como para la de cualquier persona que se encuentre en dichos establecimientos. Por lo tanto, el Estado deba tener la capacidad de mantener la seguridad al interior de los centros de detención y así, garantizar la seguridad de las y los detenidos en todo momento, así como de las propias que laboran en estos centros.

28. En el caso concreto, esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, encontró que, personal del Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas, incurrió en omisiones que vulneraron los derechos humanos de **V1+**, cuando éste perdió la vida al interior de los separos preventivos del mencionado centro de reclusión donde se encontraba detenido. Y que, de acuerdo a la necropsia realizada por la **DOCTORA KARLA FARIDY LÓPEZ REYES**, Perito Médico Legista, adscrita a la Dirección General de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, que obra dentro de la carpeta única de Investigación número […] la causa de muerte de **V1+**, se debió a una asfixia por ahorcamiento.

29. De las constancias que integran la carpeta única de Investigación número […], de la cual, obra copia en esta Comisión, se advierte que, el día 25 de marzo de 2020, **V1+**, fue detenido por elementos de la Policía de Investigación del estado de Coahuila, destacamentados en Saltillo, siendo entregado a personal de la Policía de Investigación de Zacatecas, el 28 de marzo de 2020, quienes, a su vez, ese mismo día, lo pusieron a disposición de las autoridades penitenciarias del Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas.

30. De igual forma, de acuerdo al oficio 157, dentro de la causa penal […], suscrito por el **LICENCIADO JESÚS EDUARDO GARCÍA LECHUGA**, Inspector Jefe del grupo de aprehensiones I, así como por los **CC. ALEJANDRO BRIDERI SOLÍS RODRÍGUEZ, JOSÉ DE JESÚS FLORES MONCADA, RAÚL SAUCEDO GUERRERO** y **FERNANDO GARCÍA RUBIO**, Policías Primeros, todos adscritos a la Dirección General de la Policía de Investigación, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, **V1+**, acababa de egresar de un centro hospitalario, puesto que, fue necesario, intervenirlo quirúrgicamente en el estado de Coahuila.

31. De lo anterior, el 28 de marzo de 2020, la **DOCTORA MYRIAM AZUCENA DELGADO ARTEAGA,** Perito Médico Legista, adscrita a la Dirección General de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, emitió certificado médico de lesiones de **V1+**, en el cual, consta que éste, tenía una herida suturada en el pectoral izquierdo, cuadrante inferolateral, que medía un centímetro de longitud, con equimosis perilesional de coloración morado y amarillo que medía cinco por tres centímetros. Asimismo, tenía una herida suturada en el abdomen sobre la línea media anterior, que medía diez centímetros de longitud, en dirección vertical con equimosis perilesional de coloración morada de diez por cuatro centímetros. De igual forma, herida suturada en antebrazo izquierdo, cara anterior, tercio distal dirección horizontal al eje mayor vertical del miembro que medía seis centímetros de longitud. Además, la **DOCTORA MYRIAM AZUCENA DELGADO ARTEAGA**, señaló que **V1+** refirió hospitalización en un centro médico de Saltillo, Coahuila. Con ello, se puede asegurar que **V1+**, previo a quedar sujeto a la

29 Corte IDH. Caso Familia Barrios Vs. Venezuela. Sentencia de 24 de noviembre de 2011. Fondo, Reparaciones y Costas. Párr. 48.

disposición de las autoridades zacatecanas, tuvo una intervención hospitalaria en el estado vecino de Coahuila.

32. Así pues, el 28 de marzo de 2020, elementos de la Policía de Investigación, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, pusieron a **V1+** a disposición del personal del Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas, lo cual, conlleva la obligación de salvaguardar el derecho a la vida y a la integridad personal de las personas privadas de la libertad, como lo era el caso de **V1+.** En ese entendido, este Organismo Estatal estima que, tanto el Director, como el personal de guardia y custodia del referido centro penitenciario, tienen el indubitable deber de apegarse al marco normativo nacional e internacional de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad, pues es deber del Estado mexicano velar por la vida e integridad de las personas detenidas. Situación que en el caso en estudio no sucedió, en virtud a que **V1+**, perdió la vida al interior del Centro Regional de Reinserción Social Varonil, de Cieneguillas, Zacatecas, mientras se encontraba en custodia del Director y del personal de guardia y custodia de dicho centro penitenciario.

33. Sobre el deber del Estado garante de los derechos de las personas privadas de su libertad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostiene que "además de la prohibición a la privación de la vida, el Estado tiene la obligación en el ámbito legislativo, judicial y administrativo de adoptar medidas positivas para preservar la existencia, por lo que se considera transgresión al derecho a la vida no sólo cuando una persona es privada de ésta, sino también cuando se omite adoptar las medidas aludidas para preservarla"[30], por consiguiente, también debe evitar que se ponga en riesgo. Por ende, se advierte un doble sentido en relación a la tutela del derecho a la vida, por un lado, el deber negativo del Estado de respetar la vida humana, mediante la prohibición de su privación arbitraria, así como el deber positivo de adoptar todas las medidas apropiadas para proteger y preservar el derecho a la vida de quienes se encuentren bajo su jurisdicción, o bien, que no se les impida el acceso a las condiciones que los garanticen[31].

34. Entonces, se cuenta con la declaración realizada por **RAMIRO REYES ALEMÁN**, elemento de la Policía Penitenciaria, del Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas, se desprende que, el 28 y 29 de marzo de 2020, se encontraba de servicio en el centro de internamiento de referencia, señalando que, sin un horario en específico, realizó rondines por las celdas, sin que se comunicara con las personas privadas de la libertad, solamente observó lo que se alcanza a ver por una lámpara que ilumina el interior de los dormitorios. Hasta que, siendo aproximadamente las 07:40 o 07:50 horas, del 29 de marzo de 2020, comenzó a pasar lista a las personas privadas de la libertad en el módulo 3 de sentenciados, empezando por la celda 1, hasta que llegó a la número 9 y llamó a **V1+** en dos ocasiones, sin que éste respondiera, por lo cual, se asoma por los barrotes y observa que **V1+**, se encontraba con una cuerda en el cuello y amarrado del barrote de la ventana de su estancia. Por lo que, le dio aviso al **COMANDANTE ABRAHAM HERNÁNDEZ JASSO**. Asimismo, manifestó que en ningún momento ingresó a la celda donde se encontraba el cuerpo sin vida de **V1+**.

35. Por su parte, **ALEJANDRO ÁLVAREZ NÚÑEZ,** elemento de la Policía Penitenciaria, del Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas, señaló ante personal de esta Comisión que, el día 29 de marzo de 2020, aproximadamente a las 08:00 horas, se encontraba en el área de guardia, recibiendo las novedades del pase de lista de las personas privadas de la libertad, recibiendo la información por parte del **COMANDANTE ABRAHAM HERNÁNDEZ JASSO**, que en la celda 9, del módulo 3 de sentenciados, una persona privada de la libertad, al momento del pase de lista, no contestó. Por lo cual, señaló que se comunicó, vía telefónica, con el **DOCTOR PEDRO ALBERTO IBARRA LÓPEZ**, médico de guardia en el Centro penitenciario de referencia.

---

30 SCJN. "DERECHO A LA VIDA. SUPUESTOS EN QUE SE ACTUALIZA SU TRANSGRESIÓN POR PARTE DEL ESTADO". Seminario Judicial de la Federación, registro 163169; Corte IDH. Caso Comerciantes vs. Colombia. Sentencia de 5 de julio de 2004. Fondo, Reparaciones y Costas. Párr.153.

31 CNDH. Recomendación 47/2015, "Sobre el caso de violación al derecho a la salud y a la vida, quien se encontraba internado en el Centro Federal de Readaptación Social No. 11, en Hermosillo, Sonora", de 9 de diciembre de 2015, párr.32

36. Ahora bien, el **COMANDANTE ABRAHAM HERNÁNDEZ JASSO,** personal de la policía penitenciaria, del Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas, señaló ante personal de esta Comisión que, aproximadamente a las 08:00 horas, del 29 de marzo de 2020, le reporta el **OFICIAL RAMIRO REYES ALEMÁN**, elemento de la Policía Penitenciario del referido centro penitenciario, el pase de lista de las personas privadas de la libertad, percatándose que le faltaba una, por lo cual, se trasladó a la celda número 9, del dormitorio 3, observando desde la reja de la puerta, que **V1+**, se encontraba colgado de los barrotes de una ventana, dando parte al **COMANDANTE ALEJANDRO ÁLVAREZ NÚÑEZ**. Posteriormente, llegaron el director, el médico, personal jurídico y el jefe de seguridad del Centro, percatándose el doctor que **V1+**, ya no tenía signos vitales. Además, señaló el **COMANDANTE ABRAHAM HERNÁNDEZ JASSO** que, por las noches, se dan rondines por el exterior de los dormitorios, sin asomarse a las celdas.

37. Del acta circunstanciada recabada por personal de este Organismo, en relación al video del circuito cerrado, captado en el módulo 3 de sentenciados, del Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas, se puede observar que, siendo las 21:21 horas del día 28 de marzo de 2021, ingresa **V1+** a una de las celdas de dicho módulo, el cual iba acompañado por dos Policías Penitenciarios.

38. Posteriormente, en el video captado el día 29 de marzo de 2021, en el módulo 3 de sentenciados, del Centro Regional de Reinserción Social Varonil, de Cieneguillas, Zacatecas, siendo las 07:59 horas, se observa a dos custodios que caminan en el patio del dormitorio, deteniéndose frente a una celda. A las 8:00 horas, se aprecia que otro Policía Penitenciario se regresa corriendo hacia el fondo del módulo. A las 8:07 horas, se ve a un Policía Penitenciario caminar por el patio de las celdas, se acerca a una y a las 8:08 se retira y nuevamente se vuelve acercar. A las 8:09 horas, sale otro Policía Penitenciario de una de las celdas del lado derecho, se detiene en medio del patio y se observa que éste platica con alguien, luego se retira. Posteriormente a las 8:14 horas, se aprecia a tres custodios caminar por el patio de las celdas y dirigirse a una de ellas del lado izquierdo, también los acompaña otra persona con vestimenta playera color negro, pantalón color beige y lentes en color negro. Posteriormente, se acercan otros dos policías penitenciarios, pero se observa que no ingresan a la celda, solamente ven hacia el interior de la celda. A las 8:18 horas, se aprecia caminar por el patio de las celdas a dos masculinos, quienes se acercan a la celda de referencia, los cuales no ingresan y no traen vestimenta de custodios. Asimismo, hay dos Policías Penitenciarios en el patio, y uno de ellos toma fotografías hacia la celda.

39. De igual forma, en el acta circunstanciada de las videograbaciones de los días 28 y 29 de marzo de 2020, se observa que **V1+** fue internado a las 21:21 horas del día 28 de marzo, y en el transcurso de la noche, no se aprecia que ninguna persona entrara al módulo 3 de sentenciados ni acercarse a las celdas, así como tampoco se observan rondines de policías penitenciarios en el transcurso de la noche.

40. El deceso de **V1+,** a consecuencia de la falta de rondines constantes hacia las celdas de los dormitorios, pone de manifiesto el incumplimiento a la obligación del Estado de asegurar y garantizar los derechos humanos de todas las personas, en específico tratándose de quienes se encuentran privadas de la libertad, donde dada su condición, el Director del Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas, al encargarse de su custodia, asume la calidad de garante, lo cual, lo obliga a preservar todos aquellos derechos que la detención no ha restringido; pues quienes se encuentran detenidos en cualquier centro de detención, están sujetos a un régimen jurídico particular y dicho sometimiento o especial sujeción no justifica el detrimento o menoscabo de sus derechos humanos.

41. Por otro lado, de las evidencias recabadas por este Organismo, en el asunto en estudio, se hace posible advertir que **V1+** perdió la vida al interior de su celda, lo cual, no exime de responsabilidad al Director ni a los elementos de la Policía Penitenciaria, del Centro Regional de Reinserción Social Varonil, de Cieneguillas, Zacatecas, ya que al estar bajo su custodia, era responsabilidad de éstos, el velar por la salvaguarda de los derechos que no son suspendidos con la detención de las personas privadas de la libertad, como lo es el derecho a la integridad y seguridad personal y, por supuesto, el derecho a la vida.

42. Del mismo modo, resulta importante señalar que, en concordancia con la Ley Nacional de Ejecución Penal, uno de los derechos de las personas privadas de su libertad, de acuerdo al artículo 9 de la ley de referencia, es permanecer en estancias adecuadas a los niveles de seguridad, custodia e intervención; derecho que, por ende, conlleva una obligación por parte de las autoridades penitenciarias, la cual, se establece en el artículo 15 de la misma ley, y que consiste en intercambiar, trasladar, custodiar, vigilar y brindar tratamiento a toda persona que fuere privada de su libertad por orden de los tribunales del Estado o de la autoridad competente, desde el momento de su ingreso a cualquier Centro o establecimiento penitenciario.

43. Lo anterior, en el caso específico de **V1+**, no se cumplió por parte de las autoridades, en virtud a que, **V1+** ingresó a la celda 9, del módulo 3 de sentenciados, a las 21:21 horas del 28 de marzo de 2020, siendo que a las 08:00 horas del día siguiente, es encontrado sin vida por parte del **OFICIAL RAMIRO REYES ALEMÁN**, de la Policía Penitenciaria del Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas, es decir, **V1+**, no estuvo ni 12 horas con vida en la celda, lo que evidencia una falta de vigilancia y cuidado de su derecho a la vida, por parte de los elementos de la Policía penitenciaria del referido centro.

44. En este sentido, dentro de la carpeta única de investigación […], se puede apreciar la necropsia practicada en el cuerpo de **V1+**, por parte de la **DOCTORA KARLA FARIDY LÓPEZ REYES**, Perito Médico Legista, adscrita a la Dirección General de Servicios Periciales, de la Fiscalía General de Justicia del Estado, la cual, dio inicio a las 15:40 horas, del día 29 de marzo de 2020, determinando que la causa de muerte de **V1+**, fue asfixia por ahorcamiento, señalando que, aproximadamente ésta sucedió de catorce a dieciséis (14-16) horas antes del inicio de la necropsia, es decir, probablemente, la pérdida de la vida de **V1+**, aconteció de las 23:40 horas del 28 de marzo de 2020, a las 01:40 horas del día 29 del mismo mes. Así entonces, considerando que el ingreso a la celda de **V1+**, ocurrió a las 21:21 horas, se puede decir que, permaneció con vida al interior de su celda, de 2 a 4 horas con 19 minutos, lo cual, hace aún más evidente la falta de protección por parte del estado, incumpliendo con ello su obligación como garante de los derechos de las personas privadas de la libertad. En virtud a que, desde el momento de su internamiento en la celda, **V1+**, permaneció muy poco tiempo con vida, sin que, en ese transcurso, el personal de guardia y custodia del multi referido centro penitenciario, lo haya vigilado, incluso, sabiendo que éste, en días anteriores, fue intervenido quirúrgicamente. No obstante, fue hasta el pase de lista del día 29 de marzo de 2020, que observan en el interior de la celda, el cuerpo sin vida de **V1+**, sin que, evidentemente, pudieran hacer alguna maniobra para reanimarlo, ya que éste, tenía varias horas sin vida.

45. Además de lo anterior, se desprende que **V1+**, fue encontrado con una soga alrededor de su cuello, que se encontraba amarrada de los barrotes de una ventana que se encuentra al interior de la celda. Lo anterior, se puede observar en el acta de registro e inspección del lugar, además de las fotografías recabadas por el Policía Primero **IVÁN ESPINOZA MARTÍNEZ**, de la Policía de Investigación, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, la cual consta en la carpeta de investigación […].

46. Así pues, es completamente reprochable al director y a los elementos de la Policía Penitenciaria, del Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas, que una persona privada de la libertad, tenga acceso a un objeto con el que pueda atentar contra su integridad, o contra su vida. Incluso la desatención es mayor, cuando esta persona privada de la libertad, tenía de 2 a 4 horas ingresado en la celda en la que perdió la vida, es decir, no tuvo contacto con ninguna otra persona privada de la libertad, solamente con los elementos de la Policía Penitenciaria que lo trasladaron a la celda, pues como se observó en la videograbación del circuito cerrado, nadie más ingresó o estuvo cerca de la celda de **V1+**, durante el tiempo que éste permaneció privado de la libertad, por lo cual, no es razonable, que **V1+**, haya sido encontrado con una soga alrededor de su cuello. Lo cual denota, una evidente desatención por parte del personal de Guardia y Custodia del Centro Regional de Reinserción Social Varonil, de Cieneguillas, Zacatecas, los cuales, o bien, no realizaron una revisión exhaustiva en las pertenencias que ingresó **V1+**, o no revisaron de manera adecuada la celda, para permitir que ahí estuviera una soga.

47. En esas circunstancias, esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, tiene debidamente demostrado, que existió omisión en la seguridad y custodia de la celda 9, del módulo 3, del Centro Regional de Reinserción Social Varonil, de Cieneguillas, Zacatecas, por parte del **GENERAL DE BRIGADA RETIRADO IGNACIO LÓPEZ FLORES**, otrora Director de dicho centro penitenciario, así como de **ALEJANDRO ÁLVAREZ NÚÑEZ ABRAHAM HERNÁNDEZ JASSO** y **RAMIRO REYES ALEMÁN**, Policías Penitenciarios, del multireferido Centro.

48. Del análisis realizado, esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, sostiene que, el **GENERAL DE BRIGADA RETIRADO IGNACIO LÓPEZ FLORES**, otrora Director del Centro Regional de Reinserción Social Varonil, de Cieneguillas, Zacatecas, así como **ALEJANDRO ÁLVAREZ NÚÑEZ ABRAHAM HERNÁNDEZ JASSO** y **RAMIRO REYES ALEMÁN**, Policías Penitenciarios, del centro de referencia, vulneraron los derechos de **V1+**, al haber sido omisos en la obligación que tiene el estado como garante del derecho a la vida de las personas privadas de la libertad.

VII. CONCLUSIONES DEL CASO.

1. Esta Comisión rechaza la vulneración del derecho de las personas privadas de su libertad, en relación a la obligación del Estado de salvaguardar la vida, respecto a los hechos sucedidos en perjuicio de **V1+,** atribuible a la omisión del personal del Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas, en virtud a que, bajo su custodia, **V1+** perdió la vida a escasas horas de haber sido ingresado a la celda 9, del módulo 3 de sentenciados, de dicho centro penitenciario, sin que durante el tiempo que estuvo privado de la libertad, se hayan realizado rondines de vigilancia efectiva, además de que **V1+**, fue encontrado con una soga, con la cual, perdió la vida.

VIII. DE LAS VÍCTIMAS INDIRECTAS.

1. El artículo 4°, párrafo segundo, de la Ley de Víctimas, del Estado de Zacatecas, establece que, cuando como consecuencia de la comisión de un delito o de violaciones a los derechos humanos reconocidos en la Constitución, y en los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea Parte, se reconozca una víctima directa, se considera como víctima indirecta a los familiares o a aquellas personas físicas a cargo de la víctima directa, que tengan una relación inmediata con ella; en ese entendido, se considera como tal al cónyuge, la concubina o el concubinario, las hijas e hijos de la víctima, los padres, y los dependientes económicos de la víctima.

2. En el presente caso, esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, identificó como víctimas indirectas de **V1+**, con relación al derecho de las personas privadas de su libertad, en cuanto a la obligación del Estado de salvaguardar la vida, y a **VI1** y **M1**, en su calidad de madre e hijo respectivamente, según se desprende de la integración del expediente de queja y la carpeta de investigación […].

IX. REPARACIONES.

1. A nivel de Derecho interno, el artículo 1º Constitucional establece en su párrafo tercero que “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”.
2. Así, en un respeto irrestricto del Estado de Derecho, las personas gozarán de la garantía de que en caso de ser objeto de violación a sus derechos humanos, podrán reclamar que el o los responsables de dicha vulneración sean sancionados, pues el Estado tiene la posición de garante de sus derechos y por lo tanto; según lo ha dispuesto la Suprema Corte de Justicia de la Nación, “Las víctimas de violación a los derechos humanos o sus familiares,

tienen derecho a la reparación adecuada del daño sufrido. Lo cual debe concretarse a través de medidas individuales tendientes a restituir, indemnizar y rehabilitar a la víctima, así como de medidas de satisfacción de alcance general y garantías de no repetición, mediante los procedimientos previstos legalmente para esos efectos, lo cual no es una concesión graciosa, sino el cumplimiento de una obligación jurídica. Lo anterior deriva tanto del régimen previsto constitucionalmente como de los instrumentos internacionales ratificados por México y de los criterios de organismos internacionales, los cuales se manifiestan claramente en el sentido de que es un derecho efectivo de las personas agraviadas a nivel fundamental obtener una reparación proporcional a la gravedad de las violaciones y al daño sufrido"[32].

3. El deber de reparación por violaciones a los derechos humanos, a nivel internacional lo encontramos dispuesto tanto en el sistema universal como regional de protección a los derechos humanos. En el ámbito universal, se encuentra previsto en los "*Principios y directrices básicos sobre el derecho a las víctimas de violaciones manifiestas a las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves al derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones"*, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 2005, donde se dispone que las violaciones de derechos humanos deben contemplar, de forma apropiada y proporcional a la gravedad de ésta, una reparación plena y efectiva en las formas siguientes: indemnización, restitución, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, lo cual a su vez es también contemplado por la Ley General de Víctimas, en sus artículos 1, último párrafo, 7, fracción I y II, y particularmente en el texto legal del artículo 26, que establece que *"Las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera oportuna, plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva por el daño que han sufrido como consecuencia del delito o hecho victimizante que las ha afectado o de las violaciones de derechos humanos que han sufrido, comprendiendo medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y medidas de no repetición"*, además por lo previsto en el artículo 27 del mismo ordenamiento legal. Por ello, resulta particularmente importante la ejecución de las medidas de reparación por parte del Estado dirigidas a la no repetición en Zacatecas de hechos similares a los ocurridos en el presente caso.

4. En el sistema regional, la Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 63.1 establece que: Cuando se decida que hubo violación a un derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Asimismo, dispondrá, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o la situación que ha configurado la violación a estos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada.

5. Por su parte, La CrIDH, ha establecido que *"Las reparaciones, como el término lo indica, consisten en las medidas que tienden a hacer desaparecer los efectos de las violaciones cometidas. Su naturaleza y su monto dependen del daño ocasionado en los planos tanto material como inmaterial"*[33].

6. Este doble alcance de la norma reparatoria, ha incidido cada vez con mayor frecuencia en el desarrollo de la jurisprudencia de la CrIDH, dando lugar a una arquitectura reparatoria que tendrá como objetivo, no sólo borrar las huellas que en la víctima produjo el actuar del Estado, sino también evitar que ese tipo de hechos se vuelvan a repetir.[34]

7. Por lo que hace a este derecho, el artículo 51 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, dispone que, al acreditarse una violación a los derechos humanos atribuible a un servidor público estatal, la Resolución formulada al respecto debe incluir las medidas que procedan para lograr la efectiva restitución de las personas afectadas en sus derechos.

---

32 Tesis P/LXII/2010, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena Época, t XXXIII, enero de 2011, pág. 28

33 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Acevedo Jaramillo y otros Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de febrero de 2006. Serie C No. 144, Párr. 175.

34 Rousset Siri, Andrés Javier (2011): *El Concepto de reparación integral en la Jurisprudencia Interamericana de Derechos humanos.* Revista Internacional de Derechos Humanos / ISSN 2250-5210 / 2011 Año I – N1 59 www.revistaidh.org

Modalidades de la reparación del daño. La reparación del daño comprende diversas modalidades en las que se puede materializar.

A) De la indemnización.
1. La indemnización ha de concederse, de forma apropiada y proporcional a la gravedad de la violación y a las circunstancias de cada caso, por todos los perjuicios económicamente evaluables que sean consecuencia de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos o de violaciones graves del derecho internacional humanitario, tales como los siguientes:

a) El daño físico o mental;
b) La pérdida de oportunidades, en particular las de empleo, educación y prestaciones sociales;
c) Los daños materiales y la pérdida de ingresos, incluido el lucro cesante;
d) Los perjuicios morales;
e) Los gastos de asistencia jurídica o de expertos, medicamentos y servicios médicos y servicios psicológicos y sociales.[35]

2. En el presente punto, debido al fallecimiento de **V1+**, la indemnización se realizaría a favor de las víctimas indirectas, que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 4 fracción I y II, de la Ley de Atención a Víctimas del Estado de Zacatecas, correspondería a su madre e hijo, **VI1** y **M1**, quienes deberán inscribirse en el Registro Estatal de Víctimas, a fin de que tengan acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, previsto en la Ley de Atención a Víctimas del Estado de Zacatecas.

B) De la rehabilitación.
1. La presente reparación debe "incluir la atención médica y psicológica, así como servicios jurídicos y sociales."[36], en ese contexto, las medidas de rehabilitación buscan reducir los padecimientos físicos y psicológicos de las víctimas, a través del otorgamiento de servicios de atención médica, psicológica, jurídica y social que éstas requieran.

2. Por lo tanto, si bien, **V1+**, como víctima por omisión, del personal del Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas, no puede recibir atención, sin embargo, deberá brindarse la atención psicológica especializada en tanatología a **VI1** y **M1**, por la afectación emocional que pudiera haber causado su deceso.

C) De las medidas de satisfacción.
1. Estas medidas contemplan la verificación de los hechos y la revelación de la verdad, así como la aplicación de sanciones jurídicas y administrativas, a los responsables de las violaciones a los derechos humanos, además de la inclusión de las capacitaciones respecto a las normas internacionales de protección a los derechos humanos.

2. Por lo anterior, esta Comisión considera trascendente fortalecer las capacidades institucionales en materia de vigilancia, cuidado y atención, de las personas privadas de su libertad, respecto al derecho a la vida, en relación con el deber del Estado garante de las personas privadas de la libertad, garantizando con ello, el bienestar de las personas detenidas en el Centro Regional de Reinserción Social Varonil, de Cieneguillas, Zacatecas.

3. Se requiere que la Secretaría de Seguridad Pública, proceda a iniciar, integrar y concluir, investigación administrativa, en contra de **ALEJANDRO ÁLVAREZ NÚÑEZ ABRAHAM HERNÁNDEZ JASSO** y **RAMIRO REYES ALEMÁN**, Policías Penitenciarios, del Centro Regional de Reinserción Social Varonil, de Cieneguillas, Zacatecas, los cuales incumplieron con la obligación de salvaguardar el derecho a la integridad y a la vida de las personas privadas de su libertad, aunado a su posición de Estado garante.

D) Las garantías de no repetición.
1. Son aquellas que se adoptan con el fin de evitar que las víctimas vuelvan a ser objeto de violaciones a sus derechos humanos, y para contribuir a prevenir o evitar la repetición de actos de su misma naturaleza.

---

35 Ibídem, párr. 20.

36 Ibídem, párr. 21.

2. A fin de prevenir la violación a los derechos humanos que se describen en los párrafos que anteceden, este organismo estima que la capacitación de los servidores públicos debe continuar implementándose y debe materializarse en programas y cursos permanentes donde se aborden temas de derechos humanos, especialmente los relacionados a la protección de la integridad personal de las personas privadas de la libertad, así como al derecho a la vida, en relación con el deber del Estado garante de las personas privadas de la libertad, para efectos de prevenir la repetición de los actos como los expuestos en el presente caso.

3. Asimismo, esta Comisión considera trascendente fortalecer las capacidades institucionales en materia de vigilancia, cuidado y atención de las personas privadas de su libertad, respeto al derecho la integridad personal y su derecho a la vida.

4. De igual forma, es indispensable la educación en materia de respeto, protección y garantía de los derechos humanos por parte de los servidores públicos involucrados, siendo obligatorio para dichos funcionarios observar lo contenido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y demás disposiciones legales nacionales e internacionales.

Por lo anterior, deberán implementarse programas de capacitación dirigidos a los elementos de la Policía Penitenciaria, del Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas, en materia de derechos humanos, que les permitan identificar las acciones u omisiones que vulneren los citados derechos en perjuicio de las personas privadas de libertad, a fin de incidir en la erradicación de éstas.

X. RECOMENDACIONES.

Por lo anterior, y con fundamento en los 1 y 102 apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 2, 3, 4, 8, 17, 37, 51, 53, 54, 56, 57 y 58 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas se emiten las siguientes Recomendaciones:

PRIMERA. En un plazo máximo de un mes, a partir de la notificación de la presente Recomendación, se inscriban en el Registro Estatal de Víctimas, como víctima directa a **V1+**, así como a **VI1**, madre, y **M1**, hijo, como víctimas indirectas de éste. Lo anterior, a efecto de que, en un plazo máximo de un año, se garantice su acceso oportuno al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, previsto en la Ley de Atención a Víctimas del Estado de Zacatecas, y se envíen a esta Comisión las constancias con que se acredite su cumplimiento.

SEGUNDA. En un plazo máximo de un mes, contado a partir de la aceptación de la presente Recomendación, se valore y determine la atención psicológica que requieren **VI1** y **M1**, como víctimas indirectas de violación a sus derechos humanos, por las posibles afectaciones que pudieran presentar, en relación a los sucesos ocurridos con motivo de los hechos objeto de estudio de la presente Recomendación y, de ser el caso, en un plazo de un mes, posteriores a la realización de dichas valoraciones, se realicen las gestiones necesarias para que, en caso de que así lo decidan las víctimas, se inicie su tratamiento, hasta lograr su total restablecimiento. Debiendo, remitir a este Organismo, las constancias que acrediten su debido cumplimiento.

TERCERA. En un plazo máximo de un mes, contado a partir de la aceptación de la presente Recomendación, se implementen mecanismos que eviten que el Estado incumpla con su posición garante, respecto a las personas privadas de su libertad en el Centro Regional de Reinserción Social Varonil, de Cieneguillas, Zacatecas. Para lo cual, deberán adoptarse los protocolos, medidas y acciones necesarias para prevenir todas aquellas situaciones que pudieran conducir, tanto por acción como por omisión, en la supresión de los derechos a la integridad física y a la vida de las personas detenidas.

CUARTA. En un plazo máximo de un mes, contado a partir de la aceptación de la presente Recomendación, se implementen mecanismos que garanticen, que los rondines realizados

por los elementos de la Policía Penitenciaria del Centro Regional de Reinserción Social Varonil, de Cieneguillas, Zacatecas, sean eficientes en la custodia y vigilancia de las personas privadas de la libertad, siempre apegadas al respeto de sus derechos humanos.

QUINTA. En un plazo máximo de un mes, contado a partir de la aceptación de la presente Recomendación, se implementen mecanismos de revisión, por parte de las autoridades penitenciarias, para evitar que las personas privadas de la libertad, cuenten con objetos con los que puedan causarse o causar daño a otros, esto, desde el momento de su ingreso, siempre apegadas al respeto de sus derechos humanos.

SEXTA. Dentro de un plazo máximo de tres meses, contados a partir de la aceptación de la presente Recomendación, se realicen capacitaciones al personal del Centro Regional de Reinserción Social Varonil, de Cieneguillas, Zacatecas, respecto a sus obligaciones contenidas en los tratados internacionales de los que México es parte, así como de las contenidas en las disposiciones nacionales, relativas al derecho a la vida, en relación a la obligación que tiene el Estado de protegerlo, derivado de la posición garante que éste tiene respecto a las personas privadas de la libertad.

SÉPTIMA. Dentro del plazo máximo de tres meses, contados a partir de la aceptación de la presente Recomendación, se capacite a los Policías Penitenciarios, del Centro Regional de Reinserción Social Varonil, de Cieneguillas, Zacatecas, a fin de que realicen de manera eficaz, la vigilancia, cuidado y atención de las personas privadas de su libertad, salvaguardando ante todo el respeto, protección y garantía de los derechos humanos a la vida e integridad personal.

OCTAVA. Dentro de un plazo máximo de un mes, contado a partir de la aceptación de esta Recomendación, se instruya al Órgano Interno de Control, de la Secretaría de Seguridad Publica de Zacatecas, proceda a realizar el procedimiento interno de responsabilidad administrativa que corresponda en en contra de **ALEJANDRO ÁLVAREZ NÚÑEZ ABRAHAM HERNÁNDEZ JASSO** y **RAMIRO REYES ALEMÁN**, Policías Penitenciarios, del Centro Regional de Reinserción Social Varonil, de Cieneguillas, Zacatecas, los cuales incumplieron con la obligación de salvaguardar el derecho a la integridad y a la vida de las personas privadas de su libertad.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 53, párrafo segundo de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, se hace del conocimiento de la autoridad a la que va dirigida esta Recomendación, que dispone de un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente en que ésta se le notifique, para que manifieste si la acepta o no, en el entendido de que, de no aceptarla, su respuesta se hará del conocimiento de la opinión pública. En caso de que la acepte, se le notifica que dispone de un plazo de 15 días, contados a partir del vencimiento del término del que disponía para responder sobre la aceptación, a fin de enviar las pruebas de su cumplimiento.

Por último, hágasele saber a los familiares del finado, el resultado de la presente recomendación y de conformidad con el artículo 61 de la Ley de este Organismo, que dispone de 30 días naturales, computados a partir de la fecha de notificación del presente documento, para que en caso de que exista inconformidad con la misma, interponga el recurso de impugnación correspondiente ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Así lo determina y firma

DRA. EN D. MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOS
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE ZACATECAS

Expediente: CDHEZ/582/2019

Tipo de queja: Oficiosa

Personas agraviadas: VD y M2

Autoridades Responsables: Adscritos a la Secretaría de Educación:
I. Profesora **AR2**, Directora de la Escuela Primaria (...), de (...), Zacatecas.
II. Profesor **AR1**, entonces docente de la Escuela Primaria (...), de (...), Zacatecas.

Derechos Humanos violados:
I. Derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en relación con el derecho de niñas, niños y adolescentes a que se proteja su integridad personal y sexual.

Zacatecas, Zac., a 23 de julio de 2021, una vez concluida la investigación de los hechos que motivaron el expediente CDHEZ/582/2019, y analizado el proyecto presentado por la Sexta Visitaduría General, la suscrita aprobó, de conformidad con los artículos 4, 8 fracción VIII, 17 fracción V, 37, 51, 53 y 56 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, en relación con lo dispuesto por los numerales 161 fracción X, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 y 175 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, la **Recomendación 37/2021**, que se dirige a la autoridad siguiente:

MAESTRA MARÍA DE LOURDES DE LA ROSA VÁZQUEZ, Secretaria de Educación del Estado de Zacatecas.

R E S U L T A N D O S:

I. DE LA CONFIDENCIALIDAD.

1. De conformidad con los artículos 6°, apartado A, fracción II y 16, apartado A, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 23 y 85 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, los datos personales de los peticionarios y los agraviados que así lo soliciten, relacionadas con esta resolución, permanecerán confidenciales, ya que éstos no son públicos.

2. Asimismo, en términos de lo dispuesto por los artículos 4º, párrafo noveno, 6º, apartado A., fracción II, y 16, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 16 de la Convención de los Derechos del Niño, 76 y 83 fracción XIII de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 32, 58 fracción XI y 60 fracción IV de la Ley de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Zacatecas, 23 y 85 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas; los nombres, apellidos y demás datos personales de niñas, niños y adolescentes vinculados con los hechos de la presente resolución, se mantienen bajo la más estricta confidencialidad, en pleno respeto a su derecho a la intimidad y vida privada.

II. RELATORÍA DE LOS HECHOS Y OBJETO DE LA CONTROVERSIA.

1. El 04 de noviembre de 2019, personal de este Organismo Estatal de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, recibió llamada telefónica de la **PSICÓLOGA SP1**, quien afirmó laborar en la Secretaría de Educación del Estado y que, derivado de las funciones que desempeña en la escuela primaria (...), ubicada en el municipio de (...),

Zacatecas, dos alumnas (…) le manifestaron haber sido víctimas de (…) por parte de un maestro a quien identificaron como “**AR1**”, quien al parecer ya se jubiló.

El 12 de noviembre de 2019, se emitió el acuerdo de admisión de queja oficiosa. Por razón de turno, el 13 de noviembre de 2019, se remitió el Acuerdo de Admisión de Queja Oficiosa a la Sexta Visitaduría General, bajo el número de expediente citado al rubro, a efecto de formular el acuerdo de calificación de ésta, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 123 y 124 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas.

El 13 de noviembre de 2019, la queja se calificó de pendiente y, el 14 de noviembre siguiente como presunta violación al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en relación con el derecho de niñas, niños y adolescentes a que se proteja su integridad personal y sexual; de conformidad con lo establecido por el artículo 124, fracción I, del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas.

2. Los hechos materia de la queja consistieron en lo siguiente:
El 04 de noviembre de 2019, personal de este Organismo Estatal recibió llamada telefónica en la que la **PSICÓLOGA SP1**, afirmó que mientras cumplía con las labores contratadas por la Secretaría de Educación del Estado, en la escuela primaria (...), ubicada en el municipio de (...), Zacatecas, dos alumnas del (...) le manifestaron haber sido víctimas de (…) por parte de un maestro a quien identificaron como “**AR1**”, quien al parecer ya se jubiló.

3. El 19 de noviembre de 2019, la **PROFESORA AR2**, Directora de la escuela primaria (...), de (...), Zacatecas, presentó su informe de autoridad.

III. COMPETENCIA.

1. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas es competente, en términos de los artículos 1º, 4º, 6º, 8º fracción VII, inciso A) y 31 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, en relación con los numerales 15, 22 y 23 de su Reglamento Interno, debido a que la queja se promueve en contra de un servidor público de la Secretaría de Educación del Estado.

2. De conformidad con el artículo 124, fracción I del Reglamento Interior de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, este Organismo advierte que, de los hechos materia de la queja, se pudo presumir la violación de los derechos humanos de **VD**, así como la responsabilidad por parte del servidor público señalado.

3. Esta Comisión presumió la violación de los siguientes derechos humanos:
A. Derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, en relación con el derecho de niñas niños y adolescentes a que se proteja su integridad personal y sexual.

IV. PROCEDIMIENTO ANTE LA COMISIÓN.

Con la finalidad de documentar las presuntas violaciones a derechos humanos, así como para determinar la existencia o no de responsabilidad por parte de los servidores públicos señalados, este Organismo realizó las siguientes actuaciones:

1. Entrevistas a las personas relacionadas con los hechos:
   - El 12 de noviembre de 2019, se recabó comparecencia de **P1**, mamá de **M2.**
   - El 13 de noviembre de 2019, se recabó comparecencia de **VI**, mamá de **VD.**

2. Solicitudes de informes:
   - El 13 de noviembre de 2019, se solicitó informe de autoridad a la **PROFESORA AR2**, Directora de la Escuela Primaria (...) de (...), Zacatecas.

- El 12 de noviembre de 2020, se solicitó informe, en vía de colaboración, a la **M.G.G. SPSEDUZAC1**, Subsecretaria Administrativa de la Secretaría de Educación del Estado de Zacatecas.
- El 02 de marzo de 2020, se solicitó informe, en vía de colaboración, a la **M.G.G. SPSEDUZAC1**, Subsecretaria Administrativa de la Secretaria de Educación del Estado de Zacatecas.

3. Recopilación de información:
- El 19 de noviembre de 2019, se recibió informe de autoridad por parte de la **PROFESORA AR2**, Directora de la Escuela Primaria (...), de (...), Zacatecas.
- El 25 de noviembre de 2019, personal de este Organismo Estatal realizó inspección de campo, en la Escuela Primaria (...), de (...), Zacatecas.
- El 09 de diciembre de 2019, personal de este Organismo Estatal, remitió dinámica de buzón realizada al grupo de 5 grado, grupo (...) de la Escuela Primaria (...), de (...), Zacatecas.
- El 18 de febrero de 2020, se recibió informe, en vía de colaboración, por parte de la **M.A.G. SPSEDUZAC1**, Directora de Capital Humano de la Secretaría de Educación del Estado.
- El 10 de marzo de 2020, se recibió informe, en vía de colaboración, por parte de la **M.A.G. SPSEDUZAC1**, Directora de Capital Humano de la Secretaría de Educación del Estado.
- El 20 de marzo de 2020, se recibió dictamen psicológico, emitido por el **LICENCIADO EN PSICOLOGÍA PP**, Perito Psicólogo.

V. PRUEBAS.

Con base en lo estipulado en los artículos 48 y 49 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, en relación con los numerales 150, 151, 152, 153, 154 y 155 del Reglamento Interior de este Organismo, durante el procedimiento realizado por esta Institución, se recabaron los elementos probatorios documentales que a continuación, se detallan:

VI. SOBRE LOS DERECHOS VULNERADOS

I. Derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, en relación con el derecho de niñas, niños y adolescentes a que se proteja su integridad personal y sexual.

1. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) establece que, en nuestro país, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la propia Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte. De igual forma, la Carta Magna establece que, las normas relativas a los derechos humanos deberán interpretarse a partir de los principios de interpretación conforme y pro persona.

2. En este sentido, la interpretación conforme implica que, todas las autoridades del Estado mexicano, deben interpretar las leyes a la luz y de acuerdo a los derechos humanos previstos en la constitución y en los tratados internacionales; mientras que, en sentido estricto, ésta implica que cuando existan varias interpretaciones válidas, se preferirá aquélla que sea acorde a la norma constitucional y a los instrumentos internacionales[1]. Por otra parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha entendido que, el principio *pro persona*, busca maximizar la vigencia y el respeto de los derechos humanos, al permitir que, las autoridades “opt[en] por la aplicación o

[1] Consultar, Caballero, José Luis (coord.), Sánchez Cordero, Olga, “El Control de Constitucionalidad en México, a partir de la Reforma de junio de 2011”, Derechos constitucionales e internacionales, Perspectivas, Retos y Debates, México, Tirant lo Blanch, 2018, pp.930-931.

interpretación de la norma que los favorezca en mayor medida, o bien, que implique menores restricciones a su ejercicio[2]".

3. Asimismo, el tercer párrafo del artículo 1° de la CPEUM establece que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias tienen las obligaciones generales de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos y, consecuencialmente, los deberes especiales de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones cometidos en contra de éstos. Todo lo cual, debe ser realizado de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

4. En razón a lo anterior, las autoridades del Estado Mexicano, incluidas las de esta entidad federativa, tienen la obligación de respetar, proteger y realizar los derechos humanos que forman parte de nuestro bloque de constitucionalidad. Es decir, todas y todos los servidores públicos, independientemente del orden de gobierno al que pertenezcan, deberán ceñir sus actuaciones a los estándares de derechos humanos que, por remisión expresa del propio texto constitucional, gozan de jerarquía constitucional y forman parte del parámetro de control de regularidad de ésta. Ya sea que, dichos derechos, se encuentren reconocidos expresamente en la Constitución o bien, por formar parte de algún tratado internacional ratificado por el Estado mexicano.

5. En este sentido, y atendiendo a los hechos materia de la presente Recomendación, es importante señalar que, el Estado Mexicano, forma parte de dos de los tratados internacionales más importantes en materia de derechos humanos de las mujeres: la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará). La primera de ellas, enfocada a garantizar el derecho a la igualdad de las mujeres, y generar mecanismos y estrategias para prevenir la discriminación en su contra. La segunda, orientada a salvaguardar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

6. En este contexto, las autoridades tienen la obligación legal de garantizar los derechos humanos previstos tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales ratificados en los que éste sea parte. Debiendo, además, interpretar éstos conforme a los estándares de protección, respeto y garantías más amplios en beneficio de la dignidad de las personas, particularmente de aquéllas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, como es el caso específico de las mujeres.

7. Es por ello, que instrumentos internacionales y regionales en materia de derechos humanos, reconocen que, una persona, puede ser discriminada por razones de género, debido a la percepción negativa que otras tengan respecto a su relación o pertenencia a un grupo o sector social específico. Provocándose con ello, que éstas se vean impedidas o anuladas en el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales. De ahí que, si bien, las mujeres gozan formalmente de los mismos derechos que los varones, ha sido necesario desarrollar instrumentos específicos que reconozcan la condición de desigualdad en que éstas se encuentran, respecto a su ejercicio, al tiempo que se establecen las estrategias para prevenir o corregir las discriminaciones de las que son objeto.

8. Así, surge la CEDAW, en la que se establece que, generalmente, los patrones de violencia contra las mujeres tienen origen en una cultura de discriminación contra éstas. Los cuales, se basan en concepciones erróneas de la inferioridad y la subordinación de éstas, que lo único que promueven es una cultura de violencia y discriminación basada en el género. La cual es definida por dicha convención como "toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las

[2] Ver Tesis 1ª. CCCXXVII/2014 (10ª.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Tomo I, Octubre de 2014.

libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquiera otra esfera".

9. Discriminación que el Estado tiene la obligación de combatir, a través de la adopción de una política pública encaminada a erradicarla, mediante la adopción de medidas administrativas, legislativas o de cualquier otra índole, que sean necesarias no sólo para prohibirla, sino también para sancionarla. Así, el Estado Mexicano se encuentra comprometido a garantizar que sus autoridades se abstengan de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra la mujer[3]. De manera específica, tiene el deber de garantizar que, en el ámbito educativo, se elimine cualquier concepto estereotipado de los papeles masculino y femenino, con miras a que se modifiquen los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, a fin de que se eliminen los prejuicios y prácticas consuetudinaria que refuerzan los roles y estereotipos que pesan sobre éstos.[4]

10. Por otra parte, el Comité de la CEDAW, a través de la Recomendación General 19 "La Violencia contra la Mujer", ha reconocido que la violencia contra la mujer – es decir, aquella que se ejerce en contra de éstas, por el sólo hecho de pertenecer al sexo femenino – es una forma de discriminación que impide a éstas gozar de los derechos y libertades internacionalmente reconocidos en pie de igualdad con los hombres. Conducta que, en consecuencia, cualquier autoridad tiene prohibido realizar o bien, tolerar.

11. En adición, en el sistema regional de protección de derechos humanos, la Convención de Belém do Pará refiere que, la violencia contra las mujeres es una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres, que lacera sus derechos fundamentales, al limitar, total o parcialmente, el reconocimiento, goce y ejercicio de éstos, reconociendo en consecuencia que, las mujeres, tienen el derecho humano a una vida libre de violencia y discriminación.

12. Así, dicho instrumento define a la violencia contra la mujer como cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. La cual, puede ser de tipo física, sexual y psicológica, y manifestarse en el ámbito doméstico o comunitario, incluyéndose en este último, entre otras, al ámbito educativo. De tal forma que, las servidoras y servidores públicos que se desempeñen en éste tienen la obligación de respetar la vida, la integridad física, psíquica y moral, así como la dignidad de sus alumnas, debiendo abstenerse de ejercer cualquier forma de discriminación en su contra, de promover roles y estereotipos que refuercen su subordinación o bien, de ejercer actos de acoso sexual en su contra[5].

13. Por tanto, el Estado mexicano se encuentra obligado a adoptar medidas para erradicar la violencia contra las mujeres, particularmente en las instituciones educativas, al ser ésta una causa y consecuencia de la discriminación por razones de género, que se traduce en un obstáculo para que éstas ejerzan plenamente sus derechos y libertades fundamentales, al materializarse en situaciones de exclusión, de maltrato, de abuso y de violencia en su contra. Las cuales, como ha quedado establecido, se encuentran prohibidas para todas las autoridades mexicanas.

14. En cumplimiento a dichas obligaciones, el Estado Mexicano promulgó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia[6], definiendo a ésta como "cualquier acto u omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público", estableciendo además que ésta puede ser de tipo psicológica, física, patrimonial, económica, sexual o bien, de cualquier otra forma análoga que lesiones o dañe la dignidad, integridad o libertad de las mujeres. Asimismo, especifica que, la

---

[3] Cfr. Contenido del artículo 1, 2 y 3 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
[4] Cfr. Contenido del artículo 4 y 10 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
[5] Cfr. Contenido de los artículos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.
[6] 01 de febrero de 2007

violencia contra las mujeres puede presentarse en el ámbito familiar, laboral, docente, institucional, político o comunitario.

15. Respecto a la violencia contra las mujeres en el ámbito docente, dicha Ley reconoce que ésta se ejerce por las personas que tengan un vínculo docente con la víctima, y se manifiesta a través de actos u omisiones, ejercidos por maestros o maestras, que dañan la autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de las alumnas, al discriminarlas por su sexo, edad, condición social, académica, limitaciones o características físicas, que impiden su libre desarrollo y atentan contra su igualdad, independientemente de si ésta se configura a través de un solo evento o de una serie de ellos. De manera específica, se advierte que, la violencia docente, puede constituirse también bajo las figuras de acoso o de hostigamiento sexual. Siendo este último, el que se presenta cuanto existe una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en el ámbito escolar, y que se expresa en conductas verbales, físicas o ambas, relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva. Mientas que, el acoso, se caracteriza porque, si bien no existe una relación de subordinación, hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para las víctimas.[7]

16. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia, además de reconocer que la violencia contra las mujeres puede ser perpetrada por las y los docentes, y definir algunas de las formas en que ésta puede manifestarse (acoso u hostigamiento sexual), estipula que, las entidades federativas deberán sancionar a las y los perpetradores de esta modalidad de violencia, al tiempo que se deberán adoptar los mecanismos claros para que ello. En los cuales, se salvaguardará la identidad de las víctimas, de forma que éstas no sean expuestas a una sobrevictimización. Es decir, se estipulan una serie de obligaciones institucionales, que constriñe a las autoridades administrativas a brindar una atención efectiva a las quejas de violencia contra las mujeres de las que tengan conocimiento.[8]

17. Esto es así, porque la falta de investigación, sanción y reparación de la violencia que experimentan las mujeres en razón a su sexo, se constituye como un permiso tácito o una incitación a cometer estos actos, en razón a que llevan implícito un mensaje de tolerancia o permisión de tales conductas. Por lo tanto, el estándar en la materia hace hincapié en la obligación de las autoridades educativas relativa a prevenir, investigar, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en las escuelas. Estableciendo, además, que estas acciones deben realizarse atendiendo a los principios de la debida diligencia y la perspectiva de género. Es decir, las autoridades educativas están obligadas a actuar de forma eficiente, eficaz, exhaustiva, oportuna y responsable en todos aquellos casos de violencia contra las mujeres, en el espacio escolar, de que tengan noticia. Asimismo, les corresponde detectar la presencia de relaciones desiguales de poder y tratos diferenciados basados en el sexo o el género, para poder determinar si éste es discriminatorio y, en consecuencia, implementar acciones para corregirlo.

18. En relación a lo anterior, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia, define la violencia institucional como todos aquellos “actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia[9].

19. En armonía con las disposiciones anteriores, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Zacatecas, refiere que los tipos de violencia contra las mujeres son: i) violencia física; ii) violencia psicológica; iii) violencia sexual; iv) violencia económica; v) violencia patrimonial y vi) violencia política. Mientras que en sus modalidades se contemplan: i) violencia familiar; ii) violencia laboral o docente; iii)

[7] Véase, artículos 10, 11, 12 y 13 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
[8] Véase, artículos 14 y 15 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
[9] Véase, artículo 18 Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

violencia en la comunidad; iv) violencia institucional; v) violencia política; vi) violencia digital; vii) violencia obstétrica y, viii) violencia feminicida[10].

20. El marco normativo señalado, nos permite apreciar que las mujeres, pueden ser víctimas de violencia, por la sola pertenencia a su sexo, en todos los ámbitos donde interactúan con sus semejantes, sobre todo, si ésta no se ajusta a roles de género que le han sido asignados y que, por alguna razón, el agresor considera no está cumpliendo. Así, los tipos y modalidades de violencia contra las mujeres, establecidos en ley, nos permiten deducir la existencia de relaciones de poder, entre la víctima y el agresor, en donde las mujeres se encuentran en desventaja o en condición de desigualdad que, a final de cuentas, vulnera los derechos humanos de las mujeres, al impedírseles que accedan y disfruten plenamente de sus garantías fundamentales.

21. En el caso específico, hay que recordar que se trata de mujeres menores de edad, con las que el Estado tiene la obligación de resguardar su integridad personal con el fin de lograr las mejores condiciones de bienestar y el libre desarrollo de su personalidad[11]. Por tanto, los esfuerzos para garantizar estas prerrogativas deben ser intensivos, planeados y evaluados de manera permanente. El que no se garantice un espacio libre de violencia, de manera directa vulnera el derecho a la integridad personal.

- **Derechos de niñas, niños y adolescentes.**

22. Estos derechos se refieren a la potestad de niñas, niños y adolescentes para participar activa y permanentemente, en las decisiones que les afectan o sean de su interés, en los ámbitos familiar, escolar, social, comunitario o cualquier otro en el que se desarrollen[12]. En tal sentido, implica su “derecho a ser escuchados y tomados en cuenta en los asuntos de su interés, conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez”[13]; así como su derecho a expresar su opinión libremente, en todos los asuntos que les afecten, teniéndose debidamente en cuenta, sus opiniones en función de su edad y madurez[14].

23. La violencia contra niñas, niños y adolescente, incluye todas las formas de violencia física, sexual y emocional; así como descuido, trato negligente y explotación. Las cuales, tienen consecuencias a largo plazo para la salud de quienes la padecen, incluidos problemas de desarrollo social, emocional y cognitivo, aspecto que es poco reconocido. Por tanto, el respeto y la protección efectiva de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, son algunos de los retos urgentes e impostergables para el Estado, las instituciones y la sociedad en general. Por ello, se deben redoblar esfuerzos para garantizar que, este sector de la población, se desarrolle en entornos libres de violencia que le permitan el goce y ejercicio pleno de sus derechos humanos.

24. A nivel nacional, las obligaciones internacionales en materia de infancia, se vieron reflejadas luego de casi 25 años de la adopción de la Convención sobre los Derechos de Niño. Por su parte, la creación de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, logró un cambio trascendental en materia legislativa y de políticas públicas, al instaurar disposiciones obligatorias para las autoridades, tanto del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

25. Esta legislación resulta relevante, ya que incorporó por primera vez un enfoque garantista de derechos humanos de la infancia y, planteó la creación de mecanismos institucionales para su cumplimiento; además, fijó como principio rector, la participación de niñas, niños y adolescentes en las decisiones que les afecten, y reconoció que, ellas y ellos, también son personas sujetas de derechos humanos, con capacidad para defenderlos y exigirlos. Además,

---

[10] Véase, artículos 9 y 10 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Zacatecas.
[11] Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, adoptada por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, Washington, D. C., 15 de junio de 2015, artículo 9º, párrafo segundo.
[12] Constitución Política de la Ciudad de México, artículo 24, numeral 3; y Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publicada en el *Diario Oficial de la Federación* el 4 de diciembre de 2014; última reforma publicada el 20 de junio de 2018, artículos 71 y 72.
[13] Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, artículo 71.
[14] Convención sobre los Derechos del Niño, artículo 12.

sentó las bases para consolidar un sistema de protección integral, al establecer la coordinación interinstitucional para la defensa, protección, promoción y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

26. Por tanto, el Estado mexicano, así como sus instituciones, están obligadas a que los derechos de las niñas, niños sean una realidad. Sobre todo, los derechos a una vida saludable, a una educación de calidad y a estar protegidas/os contra todo tipo de abuso y violencia. En atención a esta obligación internacional, el Fondo de las Naciones Unidas para la infancia, (UNICEF, por sus siglas en inglés), promueve cuatro principios clave de los derechos de este grupo:

- No discriminación. Todas las niñas, niños y adolescentes tienen los mismos derechos, no importa su color de piel, su religión, su procedencia o las ideas de sus padres y madres.
- Interés superior. Cualquier decisión, ley o política que pueda afectar a una niña, niño o adolescente tiene que, tener en cuenta qué es lo mejor en su caso.
- Derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo. Todas las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir y a alcanzar su máximo potencial en la vida.
- Participación. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a ser consultadas/os sobre las situaciones que les afecta y a que sus opiniones sean tenidas en cuenta[15].

27. De manera que, en la práctica, estos principios se traducen en las siguientes acciones de impacto, sobre el bienestar de las niñas, niños y adolescentes:

- En el cuidado de la primera infancia, el enfoque de derechos supone programas más integrados, que aborden los problemas desde varios frentes.
- En educación, este enfoque implica mayor atención en la igualdad de acceso a la educación entre niñas, niños y adolescentes y en mejorar la calidad de la educación para evitar el abandono escolar.
- En protección de la infancia, el enfoque de derechos significa el desarrollo de un entorno protector que identifica y refuerza los componentes principales que pueden proteger a las niñas, niños y adolescentes[16].

28. La visión que ofrece el escenario internacional, respecto de los derechos de niñas, niños y adolescentes es novedosa, y constituye un gran avance en materia de derechos humanos en general. Después de la Convención sobre los Derechos de Niño, las niñas, niños y adolescentes son considerados como seres en desarrollo, que juegan un rol fundamental en la familia, en donde se les debe de escuchar y tomar en cuenta, inclusive fomentándose de esta forma la participación de la niñez en la sociedad civil, lo que coadyuva a la construcción de políticas públicas encaminadas a salvaguardar y hacer efectivos estos derechos. Un elemento central de esta doctrina, lo constituye el **principio del interés superior**. El cual, hace referencia al conjunto de acciones y procesos tendientes a garantizarles a las niñas, niños y adolescentes un desarrollo integral y una vida digna, así como las condiciones materiales y afectivas que les permitan vivir plenamente y alcanzar el máximo de bienestar posible.

29. El término del interés superior es una garantía de que las niñas, niños y adolescentes, tienen derecho para que, antes de tomar una medida respecto de ellos, se adopten aquéllas que promuevan y protejan sus derechos. Este precepto tiene, entre otras funciones, las de ayudar a que las interpretaciones jurídicas reconozcan el carácter integral de los derechos del niño y la niña, a orientar a que tanto los padres como el Estado en general, tengan como objeto la protección y desarrollo de la autonomía del niño en el ejercicio de sus derechos; a permitir que los derechos de la niñez prevalezcan sobre otros intereses, sobre todo si entran en conflicto, y coadyuvar a obligar a que el Estado a través de sus políticas públicas den prioridad a los derechos de la niñez[17].

30. Los derechos de las niñas, niños y adolescentes en virtud de la Convención, dejan de pertenecer a la esfera del ámbito privado para convertirse en una obligación que, además de

---

[15] UNICEF. *Los 4 principios clave de los derechos de los niños.* Disponible en: https://www.unicef.es/causas/derechos-infancia
[16] Idem.
[17] Cillero Bruñol Miguel. El interés superior del niño en el marco de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. Recuperado el 14 de junio de 2007 de http://www.observatoriosocial.com.ar/proyectos/proelinteres.pdf.

los responsables primarios del niño, también compromete al Estado y a la comunidad, ya no en su forma subsidiaria sino de forma directa[18].

- **Derecho de las niñas, a que se proteja su integridad personal (física y sexual) en el ámbito educativo.**

31. En relación con lo anterior, es preciso señalar que el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, específicamente en su ámbito docente, se vincula directamente con el ejercicio que éstas tienen a la educación. Mismo que se encuentra previsto en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 13, así como en la Convención sobre os Derechos del Niño, artículo 23.3, en los que se consagra la obligación de los Estados consistente en brindar a todas las personas una formación de manera obligatoria y gratuita. Derecho que, además, debe asegurar el principio de igualdad y no discriminación. De ahí, la obligación específica de suprimir en dichos espacios, todos aquellos estereotipos y roles de género que impiden a las mujeres el goce efectivo de su derecho a la educación, especialmente, aquellos vinculados a la violencia sexual.

32. Así, entonces, el derecho a la integridad personal implica que nadie pueda ser lesionado o agredido física, psicológica o mentalmente. El cumplimiento de este derecho, se garantiza mediante el respeto, por parte de las autoridades, de las condiciones físicas, psicológicas, sexuales y morales, que permiten el libre desarrollo de las personas. Es decir, que toda persona tiene derecho a no sufrir actuaciones que le causen dolor o sufrimiento graves, ni dañen su estructura física o psicológica o bien, que alteren su organismo, ya sea de manera temporal o permanente.

33. El derecho a la integridad personal se encuentra regulado, tanto en el Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, como en el Sistema Interamericano. En el primero, se salvaguarda a través de la Declaración Universal de Derechos Humanos[19], del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos[20] y de manera específica, a través la Declaración sobre la protección de todas las personas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Los cuales, establecen que todas las personas tienen derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral y en consecuencia, a no ser sometidas a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. En el Sistema Interamericano, tanto la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre[21], como la Convención Americana sobre Derechos Humanos[22], reconocen el derecho a la seguridad personal de todo ser humano, el cual, se manifiesta mediante respeto a su integridad física, psíquica y moral.

34. En lo referente al derecho de niñas y niños, a que se salvaguarde su integridad, la Convención sobre los Derechos del Niño, establece el deber de los Estados para adoptar medidas que protejan a estos, mientras se encuentren bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que los tenga a su cargo, de toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual. En correspondencia, el artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconoce el derecho de los niños a gozar de medidas de protección especiales, por parte de su familia, la sociedad y el Estado, en razón a su condición de menor.

35. Respecto del propio derecho a la seguridad y cuidado de la persona, éste se encuentra tutelado también en la Convención sobre los Derechos del Niño[23], documento que contiene

---

[18] Polakiewicz, Marta (1998). La infancia abandonada como una violación de sus derechos humanos personalísimos. El papel del Estado en los derechos del niño en la familia, discurso y realidad. Buenos Aires: Editorial Universidad.

[19] Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.

[20] Artículo 7. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. En particular, nadie será sometido sin su libre consentimiento a experimentos médicos o científicos.

[21] Artículo I. Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.

[22] Artículo 5.I. Derecho a la Integridad Persona. 1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral.

[23] Artículo 19 1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo. 2. Esas medidas de protección deberían comprender, según corresponda,

los compromisos que han adquirido los Estados para salvaguardar los derechos de los niños; así, los artículos relativos a ello disponen de manera específica que:

> […] 2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, **tutores u otras personas responsables de él ante la ley y,** con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.

36. Los Estados Partes se asegurarán de que las **instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan** las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente **en materia de seguridad,** sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada."

37. La existencia de un instrumento específico para proporcionar a niñas y niños una protección especial, refleja un consenso y reconocimiento, por parte de los Estados, a cerca de la necesidad de eliminar las situaciones de violencia y discriminación que aquéllos experimentan. Pues, el hecho de que éstos sufran violaciones en sus derechos humanos, afecta directamente el desarrollo armonioso de su personalidad. Al respecto, la Comisión Interamericana ha señalado que un niño, es especialmente vulnerable a las violaciones de sus derechos porque, en virtud de su condición misma, en la mayoría de los casos no tienen autoridad real para tomar decisiones en situaciones que pueden tener consecuencias graves para su bienestar.[24]

38. En ese orden de ideas, la propia Corte Interamericana, a través de su Opinión Consultiva OC-17/02 *Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño*,[25] ha determinado que los Estados tienen el deber de establecer obligaciones positivas de protección, contra malos tratos, sea en sus relaciones con las autoridades públicas, en este caso la autoridad educativa, o bien con entes no estatales. Es decir, los Estados tienen el deber de adoptar todas las medidas positivas para asegurar la plena vigencia de los derechos del niño. Medidas especiales de protección de todo menor de edad, que el Estado Mexicano debe adoptar a través de cualquiera de sus agentes, para garantizar la protección de los derechos humanos de las niñas y los niños, en la inteligencia de que éstos merecen especial asistencia por el grupo etario al que pertenecen.

39. En razón a lo anterior, el 18 de abril de 2011, el Comité de los Derechos del Niño, emitió la Recomendación General 13 "*Derecho del niño a no ser objeto de ninguna forma de violencia"*, a través de la cual sostiene que toda violencia en contra de los niños y las niñas se puede prevenir y que, la expresión "toda forma de perjuicio o abuso físico o mental", establecida en el artículo 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño, implica que no se puede concebir espacio para ningún grado de violencia legalizada contra los niños. En una enumeración no exhaustiva contempla los siguientes tipos de violencia:

- Violencia por descuido;
- Violencia mental;
- Violencia física;
- Castigos corporales;
- Abusos y explotación sexual;
- Tortura y tratos o penas crueles inhumanos y degradantes;
- Violencia entre niños;
- Autolesiones;
- Practicas perjudiciales;
- Violencia en los medios de comunicación; y
- Violencia a través de las tecnologías de la información y las comunicaciones.

40. Por su parte, el Comité de los Derechos del Niño, ha definido como violencia a toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación,

---

procedimientos eficaces para el establecimiento de programas sociales con objeto de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de él, así como para otras formas de prevención y para la identificación, notificación, remisión a una institución, investigación, tratamiento y observación ulterior de los casos antes descritos de malos tratos al niño y, según corresponda, la intervención judicial.

[24] Caso 10.506, X y Y vs. Argentina, Informe No. 38/96, de 15 de octubre de 1996, considerando 103.

[25] Párrafo 87.

incluido el abuso sexual, que causa daño a los niños y niñas. Asimismo, ha establecido que la violencia contra éstos jamás es justificable; por lo cual, su prevención primaria constituye una acción prioritaria para los Estados. En este sentido, el Comité ha reconocido que, en instituciones del Estado, tales como escuelas, guarderías, hogares y residencias, locales de custodia policial o instituciones judiciales, en donde los niños son susceptibles de ser víctimas de actos de violencia intensa y generalizada, vulneran con todo ello el ejercicio de sus derechos humanos.

41. El castigo corporal, definido como todo *castigo en el que se utilice la fuerza física y que tenga por objeto causar cierto grado de dolor o malestar, aunque sea leve*, es considerado por el Comité, como una conducta degradante, que no sólo abarca acciones físicas –tales como manotazos, bofetadas, puntapiés, zarandeos, entre otros-, sino también, menosprecios, humillaciones, denigraciones, amenazas o ridiculizaciones. Asimismo, dicho Comité establece que, los maestros y personas que trabajan con niños en instituciones, podrán hacer uso razonable de la fuerza, cuando se encuentren ante una conducta peligrosa que así lo justifique, debido a la necesidad de proteger al niño o a otros. Sin embargo, el uso de dicha fuerza deberá garantizar la aplicación del principio del uso mínimo, por el menor tiempo posible[26].

42. La protección de los derechos de niñas y niños, abarca no sólo las disposiciones específicas en la materia, sino también aquéllas contenidas en las observaciones de los Organismos Internacionales, concretamente en la Observación General No. 13 “Derecho del niño a no ser objeto de ninguna forma de violencia”, el comité de los Derechos del Niño, ha detallado puntualmente el derecho de este grupo etario a no ser objeto de ninguna forma de violencia[27], entendida la proscripción de la violencia contra las niñas y niños, sin excepción. Pues el Comité ha mantenido la posición de que toda forma de violencia contra las niñas y los niños es inaceptable, por leve que sea. Pues la expresión "toda forma de perjuicio o abuso físico o mental"[28] no deja espacio para ningún grado de violencia legalizada contra los niños. Y asegura, que la frecuencia, la gravedad del daño y la intención de causar daño, no son requisitos previos de las definiciones de violencia, por lo que en cualquier momento que se presente, deberá tenerse en cuenta el interés superior del niño, para que, de modo alguno, se menoscabe el derecho absoluto del niño a la dignidad humana y la integridad física y psicológica.

43. Por otra parte, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que, en nuestro país, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la propia Constitución y en los tratados internacionales, de los que el Estado mexicano es parte. De igual forma, la Carta Magna establece que, las normas relativas a los derechos humanos, deberán interpretarse a partir de los principios de interpretación conforme y pro persona.

44. En este sentido, la interpretación conforme implica, que todas las autoridades del Estado mexicano, deben interpretar las leyes a la luz y en concordancia a los derechos humanos previstos en la constitución y tratados internacionales, mientras que, en sentido estricto, implica que cuando existan varias interpretaciones válidas, preferirá aquella que sea acorde a la norma constitucional y a los instrumentos internacionales[29]. Por otra parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha entendido que el principio *pro persona*, busca maximizar la vigencia y el respeto de los derechos humanos, y permite “optar por la aplicación o interpretación de la norma que los favorezca en mayor medida, o bien, que implique menores restricciones a su ejercicio[30]”.

45. Asimismo, el tercer párrafo del artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias

---

[26] Observación General No. 8 “El derecho del niño a la protección contra castigos corporales y otras formas de castigo crueles o degradantes, del Comité de los Derechos del Niño, emitida en 2006.
[27] Observación General número 13. Abril 18 de 2011.
[28] Artículo 19, de la Convención sobre los Derechos del Niño.
[29] Consultar, Caballero, José Luis (coord.), Sánchez Cordero, Olga, “El Control de Constitucionalidad en México, a partir de la Reforma de junio de 2011”, Derechos constitucionales e internacionales, Perspectivas, Retos y Debates, México, Tirant lo Blanch, 2018, pp.930-931.
[30] Ver Tesis 1ª. CCCXXVII/2014 (10ª.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Tomo I, Octubre de 2014.

tienen las obligaciones generales de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos y consecuencialmente los deberes especiales de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos, todo lo cual debe ser realizado de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

46. En cumplimiento a dichas obligaciones, esta Comisión al tener conocimiento, vía telefónica, del presente caso, mediante denuncia efectuada por la Psicóloga **SP1** de que dos niñas se acercaron a ella para decirle que habían sido víctimas de abuso sexual mientras cursaban el (...) de educación primaria y que se agresor lo identificaban como el profe "**AR1**". Y, al advertir que, el agravio directo lo sufrieron niñas menores de edad, resulta que, al tratarse de mujeres, menores de edad, dada la violencia que se documentó en el presente instrumento, se aborda de manera transversal la perspectiva de género.

47. La Ley General de Educación, en su artículo 14, fracción XI Bis, establece que corresponde concurrentemente a las autoridades educativas federal y locales: "(…) corroborar que el trato de los educadores hacia [los educandos] corresponda al respeto de los derechos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales ratificados por el Estado Mexicano y demás legislación aplicable a los niños y jóvenes".

48. Asimismo, en su artículo 7°, fracción VI, la propia Ley General de Educación establece como fin de la educación "(…) propiciar la cultura de la legalidad, la paz y la no violencia…así como el conocimiento de los Derechos Humanos y el respeto a los mismos". La misma Ley, en su artículo 42, señala que "en la impartición de educación para menores de edad, se tomarán medidas que aseguren al educando la protección y el cuidado necesarios para preservar su integridad física, psicológica y social, sobre la base del respeto a su dignidad…" "Se brindarán cursos a los docentes y al personal que labora en los planteles de educación, sobre los derechos de los educandos y la obligación que tienen al estar encargados de su custodia, de protegerlos contra toda forma de maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso, trata o explotación."

49. Por su parte, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 2014, en las fracciones II, VII, VIII, XI, XVIII, de su artículo 13, establece que las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la prioridad, a vivir en condiciones de bienestar, a un sano desarrollo integral, a una vida libre de violencia, a la integridad personal y a la educación. Asimismo, la mencionada Ley General, en los artículos 44, 59 y 116, fracción XV, establece que las autoridades y quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guardia y custodia de niñas, niños y adolescentes, deben llevar a cabo las acciones necesarias para propiciar las condiciones idóneas para crear un ambiente libre de violencia en las instituciones educativas.

50. El artículo 47, del mismo cuerpo legislativo expone que, **las autoridades** federales, **de las entidades federativas**, municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal (sic), en el ámbito de sus respectivas competencias, **están obligadas a tomar las medidas necesarias para prevenir, atender y sancionar los casos en que niñas, niños o adolescentes se vean afectados por** […] abuso sexual infantil, entre otras violencias.

51. Igualmente, la referida ley prevé, en las fracciones VII y VIII de su artículo 103, que "son obligaciones de quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia, así como de las demás personas que por razón de sus funciones o actividades tengan bajo su cuidado niñas, niños o adolescentes, en proporción a su responsabilidad y, cuando sean instituciones públicas, conforme a su ámbito de competencia, protegerles contra toda forma de violencia, maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso, venta, trata de personas y explotación", así como "abstenerse de cualquier atentado contra su integridad física, psicológica o actos que menoscaben su desarrollo integral".

52. En este tenor, el derecho a la educación debe brindarse bajo la premisa de buscar desarrollar el sentido de la dignidad de la persona humana. La educación que se imparta tanto en instituciones públicas como privadas debe fomentar una cultura en la que prevalezcan los valores que fundamentan los derechos humanos, los hábitos de convivencia

democrática y respeto mutuos. Ello, en razón de que la conducta de los niños y adolescentes está condicionada, en parte, por el ambiente en el cual se desarrollan[31].

53. La Comisión Estatal subraya que, en la escuela, los docentes y personal educativo, además de transmitir conocimientos, también contribuyen de modo decisivo al desarrollo emocional y cognoscitivo del niño y del adolescente y desempeñan un papel fundamental para favorecer relaciones interpersonales respetuosas, solidarias, así como para la prevención de cualquier forma de violencia escolar. En efecto, la función educativa, realizada por profesores, autoridades, padres de familia y demás actores del proceso educativo, puede construir ambientes de convivencia pacíficos e incluyentes y fomentar empatía, lo cual no sólo es un medio para el aprendizaje de los alumnos, sino un fin en sí mismo, al ser fundamental en el desarrollo de capacidades de convivencia pacífica. Es decir, en las escuelas, "se sientan las bases para la participación, el respeto, el sentido de justicia y la legalidad, [así como para] la construcción de ciudadanía"[32].

54. Por tanto, una de las formas de violencia en el ámbito escolar, es aquella en la cual la autoridad educativa (directivos, profesores y demás personal) fallen en su deber de cuidado y el maltrato escolar, es un tipo de violencia que se define como la "conducta consistente en hacer uso intencional de la fuerza o poder expresado a través de la violencia física, psicológica y/o negligencia por cualquier trabajador al servicio de la educación hacia el o los estudiantes, afectado su bienestar y proceso educativo".[33]

55. Lo anterior fue retomado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su criterio aislado, publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en octubre de 2015, cuyo rubro y texto son los siguientes: "**DERECHO A LA EDUCACIÓN. IMPLICA EL DEBER DE IMPARTIRLA EN UN AMBIENTE LIBRE DE VIOLENCIA.** La educación es un derecho humano intrínseco y un medio indispensable para realizar otros derechos humanos. Ahora bien, la educación a que tiene derecho todo niño es aquella que se concibe para prepararlo para la vida cotidiana, fortalecer su capacidad de disfrutar de todos los derechos humanos y fomentar una cultura en la que prevalezcan los valores de éstos. Asimismo, los niños tienen derecho a recibir educación que les provea las capacidades necesarias para desarrollarse y superarse en la vida. Por tanto, la prestación del servicio educativo debe transmitir los valores que hacen posible la vida en sociedad, de forma singular, el respeto a todos los derechos y las libertades fundamentales, a los bienes jurídicos ajenos y los hábitos de convivencia democrática y de respeto mutuo. En este sentido, las escuelas juegan un rol crítico en la construcción de la resiliencia y sentimientos de bienestar del niño, que han sido también vinculados a reducir la posibilidad de que éste sea victimizado en el futuro, por lo que el Estado debe garantizar el respeto a todos sus derechos humanos en el centro escolar, y avalar que se promueva una cultura de respeto a éstos. Así, es primordial que la educación se preste en un ambiente seguro y estimulante para el niño, para lo cual, las escuelas deben proveer un ambiente libre de violencia, pues aquél tiene derecho a sentirse seguro en la escuela y a no verse sometido a la opresión o humillación recurrente del hostigamiento, ya que no es exagerado señalar que la seguridad del niño en el centro escolar constituye una base fundamental para ejercer su derecho a la educación."[34]

- **Transversalidad de la perspectiva de género**

56. La perspectiva de género es una visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres. Se propone eliminar las causas de la opresión de género como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas basada en el género. Promueve la igualdad entre los géneros a través de la equidad, el adelanto y el bienestar de las mujeres; contribuye a construir una sociedad en donde las mujeres y los hombres tengan el mismo valor, la

---

[31] "Guía Básica para la prevención de la violencia en el ámbito escolar." Secretaría de Educación Pública, pp. 11-13.
[32] Fierro, Cecilia, et. al., Ojos que sí ven. Casos para reflexionar sobre la convivencia en la escuela, México, Colección Somos Maestros, Editorial SM, 2010, p. 21; citado en el Marco de referencia para la gestión de la convivencia escolar desde la escuela pública, elaborado por la Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa de la Subsecretaría de Educación Básica de la SEP, 2015, p. 10.
[33] Ver el glosario de los "Lineamientos para la Atención de quejas o denuncias por Violencia, Maltrato, Acoso Escolar y/o Abuso Sexual Infantil, en los Planteles de Educación Inicial, Básica, Especial y para Adultos en el Distrito Federal", pp. 25 y 26.
[34] Registro 2010221

igualdad de derechos y oportunidades para acceder a los recursos económicos y a la representación política y social en los ámbitos de toma de decisiones[35].

57. Por tanto, sin que medie petición de parte, todas las autoridades del Estado deben:

- Identificar primeramente si existen situaciones de poder que por cuestiones de género den cuenta de un desequilibrio entre las partes de la controversia;
- Cuestionar los hechos y valorar las pruebas desechando cualquier estereotipo o prejuicio de género, a fin de visualizar las situaciones de desventaja provocadas por condiciones de sexo o género;
- En caso de que el material probatorio no sea suficiente para aclarar la situación de violencia, vulnerabilidad o discriminación por razones de género, ordenar las pruebas necesarias para visibilizar dichas situaciones;
- De detectarse la situación de desventaja por cuestiones de género, cuestionar la neutralidad del derecho aplicable, así como evaluar el impacto diferenciado de la solución propuesta para buscar una resolución justa e igualitaria de acuerdo al contexto de desigualdad por condiciones de género;
- Para ello debe aplicarse los estándares de derechos humanos de todas las personas involucradas, […] y,
- Considerar que el método exige que, en todo momento, se evite el uso del lenguaje basado en estereotipos o prejuicios, por lo que debe procurarse un lenguaje incluyente con el objeto de asegurar un acceso a la justicia sin discriminación por motivos de género.[36]

58. Al momento de calificar los hechos denunciados, esta Comisión determinó, respecto de las autoridades de la Secretaría de Educación del Estado, que se configuraba la probable violación al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, en relación con el derecho de las niñas a que se proteja su integridad personal y sexual. En este sentido, resulta indispensable hacer alusión al estándar que configura dicho derecho y resulta necesario realizar un análisis atendiendo a los principios que rigen los derechos humanos, como es la interdependencia e indivisibilidad[37].

- **Enfoque diferenciado a favor de niñas, niños y adolescentes.**

59. La legislación nacional y los tratados internacionales, reconocen expresamente que los derechos de las niñas, niños y adolescentes prevén deberes reforzados que tienen las autoridades para con éstos, por su desarrollo progresivo, a nivel físico, cognitivo, emotivo, psicológico y social. Dependerá de las personas adultas el efectivo acceso y disfrute de todos sus derechos, así como para el ejercicio de las acciones jurídicas tendientes a exigirlos[38], por lo que, las normas y prácticas en todos los órdenes relativos a la vida de las niñas, niños y adolescentes, deben basarse en el desarrollo y ejercicio pleno de sus derechos, "buscando que la decisión tomada les beneficien directamente, a partir de la realización de un escrutinio más estricto que el de otros casos de protección a derechos [humanos], ya que son destinatarios de un trato preferente por su carácter jurídico de sujetos de especial protección[39].

60. En razón de lo anterior, el Estado tiene igualmente un deber de protección reforzado[40], que implica adoptar un enfoque proactivo basado en los derechos humanos, en el que colaboren todos los responsables que garantizar el bienestar, físico psicológico, cultural y

---

[35] Fracción IX del artículo 5° de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
[36] Tesis 1ª./J.22/2016, *Seminario Judicial de la Federación,* Décima Época, t.II, abril de 2016, p.836.
[37] Los derechos humanos son interdependientes, es decir están vinculados entre ellos y son indivisibles, que no pueden separarse o fragmentarse unos de otros. Todos los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales deben comprenderse como un conjunto. Lo anterior, también implica que el goce y ejercicio de un derecho está vinculado a que se garantice el resto de derechos; así como la violación de un derecho pone también en riesgo los demás derechos.
[38] Corte IDH. Caso de los "Niños de la Calle" (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala. Sentencia de 19 de noviembre de 1999. Serie C No.63, párr. 185.
[39] Tribunal Colegiado de Circuito (TCC). Interés Superior del menor. La obligación constitucional de salvaguardarlo justifica que el juzgador de amparo, en casos que involucren derechos fundamentales de menores, ejerza una protección reforzada en su beneficio, aunque ello signifique agravar la situación de quien instó la acción constitucional. En Tesis: (IX Región) 2º.2 C (10ª.) Segundo Circuito del Centro Auxiliar de la Décimo Primera Región, con residencia en Coatzacoalcos Veracruz. 9 de febrero de 2018.
[40] Corte IDH. Caso Ximenes Lopes Vs. Brasil. Voto razonado Juez Sergio García Ramírez. Sentencia de 4 de julio de 2006. Serie C No. 149 párrf.8.

espiritual de manera integral de niñas, niños y adolescentes, así como reconocer su dignidad humana, a través de garantizar las condiciones jurídicas y administrativas que les aseguren el ejercicio de sus derechos humanos, respecto de cualquier otro derecho en conflicto[41].

61. En este sentido, las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a cuidados y asistencia especiales[42] así como a las medidas de protección diferenciadas requeridas por su condición por parte de su familia, de la sociedad y de las autoridades correspondientes[43] lo cual implica que adicionalmente de los derechos que corresponden a todas las personas, se les protegen derechos especiales para garantizarles el pleno ejercicio de sus derechos[44].

62. Las autoridades, en sus diferentes ámbitos de competencia, deben adoptar las medidas de protección especiales que sean necesarias, entendiendo por éstas el conjunto de acciones, programas y actividades institucionales orientadas a reconocer, proteger, garantizar y resguardar los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes conforme a su interés superior, dirigidas a la prevención, atención, asistencia, restitución y reparación, con la finalidad de salvaguardar el goce y ejercicio de sus derechos con el propósito de brindar una protección integral[45].

- **Situación real de subordinación.**

63. La Suprema Corte de Justicia de la Nación[46] ha dicho que para que pueda impartirse justicia con perspectiva de género, debe identificarse si en un caso concreto existe un estado de vulnerabilidad que genere una desventaja real o un desequilibrio patente en perjuicio de una de las partes en conflicto, lo cual no puede presumirse, sino que es necesario que en autos existan elementos objetivos de los que se advierta que se actualizan situaciones de poder por cuestiones de género, lo cual no implica proteger a la mujer por el simple hecho de serlo, en tanto que el hombre también puede encontrarse en una posición de vulnerabilidad.

64. Por tanto, para identificar la desventaja deben tomarse en cuenta, entre otras cuestiones, las siguientes: a) si una o todas las partes se encuentran en una de las categorías sospechosas identificadas en las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condiciones de Vulnerabilidad; b) la situación de desigualdad de género y violencia que prevalece en el lugar o núcleo social en el que se desenvuelven las partes, para esclarecer la posible existencia de desigualdad estructural; c) el grado de estudios, edad, condición económica y demás características particulares de todas las personas interesadas o involucradas en el juicio, para determinar si realmente existe un desequilibrio entre ellas; y, d) los hechos probados en autos, para identificar relaciones de poder.

65. En el caso concreto, es evidente la existencia de condiciones de vulnerabilidad que tenía **VD**, ya que, al ser mujer, existen relaciones de poder históricamente desiguales entre ésta y los hombres, lo cual constituye una primera categoría sospechosa; otra causa de vulnerabilidad es que además de ser mujer, es niña, cuyo grado de estudios era de (...) de educación primaria, por lo que la edad y el grado de estudios constituyen la segunda categoría sospechosa; finalmente, los hechos probados en el expediente de queja, para identificar las relaciones de poder, es el hecho de que su agresor -**AR1**- era su profesor.

66. Esto es así, porque entre una alumna y las y los docentes, existe una relación de poder, que coloca a éstas en una situación de vulneración, que hace necesario la implementación de medidas especiales de protección que atiendan su condición y situación específica, a fin de que se salvaguarden sus derechos humanos, ante situaciones de discriminación y violencia que laceran su dignidad. En este sentido, la Corte Interamericana, a través de la Opinión Consultiva OC-17/02, relativa a la Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño,

---

[41] Ley de los derechos de niñas, niños y adolescentes del estado de Zacatecas.
[42] Declaración Universal de los Derechos Humanos. Artículo 25
[43] Idem., artículo 19
[44] Corte IDH. Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Opinión Consultiva OC-17/02 de 289 de agosto de 2002. Serie A No.17, párrafo 54.
[45] Fracción XVI artículo 4° de la Ley de los derechos de niñas, niños y adolescentes del estado de Zacatecas.
[46] Tesis aislada, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 41, Abril de 2017, Tomo II, página 1752, número de Registro 2014125, de rubro: JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. EL JUZGADOR DEBE IDENTIFICAR SI EL JUSTICIABLE SE ENCUENTRA EN UN ESTADO DE VULNERABILIDAD QUE HAYA GENERADO UNA DESVENTAJA REAL O DESEQUILIBRIO PATENTE EN SU PERJUICIO FRENTE A LAS DEMÁS PARTES EN CONFLICTO.

reconoce que los Estados tienen un deber especial de cuidado respecto a las niñas, tomando en cuenta su debilidad, inmadurez o inexperiencia, el cual, se traduce en una exigencia para que, todas las autoridades, atendiendo al interés superior del menor, garanticen el ejercicio de sus derechos y el más amplio desenvolvimiento de sus potencialidades.

67. En concordancia con lo anterior, el Comité de la CEDAW ha señalado, a través de su Recomendación General No. 36, que las relaciones de poder entre los sexos, asociadas a su participación en la vida escolar, es uno de los factores que afecta a las niñas y a las mujeres de manera negativa, al estar éstas caracterizadas por las insinuaciones sexuales injustificadas, como por el acoso o abuso sexual que el personal docente ejerce hacía ellas, así como por el trato sesgado que, algunos de éstos, les otorgan. Al respecto, dicho Comité puntualiza que, este tipo de violencia suele empezar con insultos, gestos amenazadores, comentarios lascivos, entre otros, y que, cuando la autoridad no reacciona, degeneran en actos violentos que no sólo provocan resultados académicos mediocres, sino que, a largo plazo, tienen efectos adversos sobre la salud y el bienestar de las alumnas.

68. Por ello, el Estado tiene el deber de erradicar, combatir, prevenir y sancionar la violencia contra las niñas y adolescentes que se ejerce en el ámbito escolar, incluyendo aquella que se presenta bajo la forma de acoso o abuso sexuales, que sea perpetrada por el personal de la escuela, incluido los docentes y el propio alumnado, a fin de garantizar el derecho a la educación de las niñas y adolescentes. Por ello, en la Recomendación General mencionada, se especifica que las autoridades deben promulgar y aplicar leyes, políticas y procedimientos adecuados para prohibir y combatir la violencia contra las niñas y las mujeres en los centros de enseñanza y en sus alrededores, incluidos el maltrato verbal y psicológico, el hostigamiento, el acoso sexual y la violencia sexual, la violencia física y la explotación; velar porque las niñas y mujeres víctimas de violencia en las escuelas puedan acceder efectivamente a la justicia y obtener reparación y, entre otros aspectos, para brindar una respuesta a los casos de violencia contra las niñas y las mujeres en los centros de enseñanza estableciendo mecanismos de denuncia confidenciales e independientes, llevando a cabo investigaciones eficaces, emprendiendo acciones penales cuando proceda, imponiendo sanciones adecuadas a los autores y presando servicios a las víctimas.

69. Tenemos entonces, que cualquier forma de violencia en contra de las mujeres es inaceptable, independientemente de la forma que ésta adopte, es decir, ya sea que se trate de violencia física, psicológica, sexual, patrimonial, económica, feminicida o cualquiera otra análoga, al lesionar la dignidad y, en consecuencia, los derechos humanos de éstas. Por ello, ninguna de dichas manifestaciones debe ser tolerada por las autoridades, ya que, el encubrimiento y la tolerancia institucional favorecen a los perpetradores, en detrimento del interés superior de las y los menores, que todas las autoridades tenemos la obligación de salvaguardar. De ahí, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su Informe de fondo No. 110/18, señale que la protección de las niñas y de las adolescentes contra la violencia sexual y de género en la escuela no sólo constituye una exigencia prioritaria, sino que implica y compromete a todo el aparato educativo, al adecuado desarrollo de investigaciones y a la sanción del personal que sea responsable de ejercer violencia contra las mujeres en ese ámbito. Precisando que, si las autoridades sabían de los actos de violencia al interior de su institución educativa, y no emprendieron ninguna investigación respecto de dichas conductas, promoverán la permisibilidad y tolerancia de este tipo de situaciones.

70. En relación directa con el punto anterior, tenemos que, las autoridades educativas, deberán garantizar a las niñas y mujeres que son víctimas de violencia en razón de género, en dicho ámbito, un acceso efectivo a la justicia. De ahí, que la Comisión Interamericana subraye la importancia de que el Estado facilite que éstas tengan acceso a recursos judiciales idóneos y efectivos, en los que, además, se actúe con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia de género. De forma tal, que éstas actúen de manera eficaz ante las denuncias presentadas y así, esclarezcan lo sucedido e identifiquen a los responsables.

71. Al respecto, la Organización de las Naciones Unidas, a través de la adopción de la Resolución aprobada el 11 de enero de 2019, denominada “Intensificación de los esfuerzos

para prevenir y eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas: el acoso sexual", insta a los Estados a que tomen en cuenta que la falta de información y conciencia, el miedo a las represalias, la persistencia de la impunidad, las pocas vías de recurso ante casos de violencia contra las mujeres y las niñas, las normas sociales negativas, como la pérdida de los medios de subsistencia o la reducción de ingresos, suelen impedir que muchas mujeres y niñas presenten denuncias o presten testimonios en casos de acoso sexual y que pidan reparación y justicia. Por lo cual, los Estados deben brindar medidas de protección jurídica pertinentes, centradas en brindar apoyo y asistencia a las víctimas de violencia, en las que se les proteja de posibles actos de represalias por presentar denuncia o prestar declaración.

72. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha interpretado que, cuando se trata de casos de violencia contra las mujeres, existe el deber reforzado de actuar con debida diligencia, derivado de las disposiciones contenidas en el artículo 7.b. de la Convención de Belém do Pará, ya que las mujeres se sitúan en una situación especial de vulnerabilidad. En razón a ello, en el caso de Paola del Rosario Guzmán Albarracín y familiares Vs. Ecuador, ésta concluyó que el Estado vulneró el derecho de acceso a la justicia, al no iniciar de oficio la investigación penal correspondiente; no impulsar de manera efectiva las investigaciones, particularmente aquella relacionada con el contexto de acoso; no adoptar medidas para que los testigos rindieran declaraciones sin represalias; la omisión de investigar la responsabilidad administrativa de los funcionaros del colegio; la falta de perspectiva de género en la investigación, entre otros aspectos, que sólo generan una situación de impunidad.

73. De manera específica, la Corte Interamericana decretó, a través de la sentencia de González y otras Vs. México, que cuando las autoridades estatales tengan conocimiento de un hecho de violencia de género deben iniciar *ex oficio* y sin dilación, una investigación seria, imparcial y efectiva por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad y a la persecución, captura, enjuiciamiento y eventual castigo de todos los autores de los hechos, especialmente cuando están o pueden estar involucrados agentes estatales. Por lo anterior, el deber de investigar no debe estar condenado a la simple formalidad, de antemano infructuosa, sino que debe traducirse en una búsqueda efectiva de la verdad.

- **Obligaciones del estado con relación a los derechos de niñas, niños y adolescentes, respecto a su integridad personal y una vida libre de violencia.**

74. Los centros educativos son espacios privilegiados para la promoción del desarrollo integral de niños, niñas, adolescentes y jóvenes; para el aprendizaje de formas sanas de convivir y relacionarse con otras personas; pero también son espacios donde, lamentablemente, pueden darse hechos de violencia, o bien conocerse manifestaciones de esta, en perjuicio de la población estudiantil.

75. Existe una clara obligación de prevenir la violencia, de prestar atención a cualquier signo de maltrato y actuar de manera diligente y expedita, en función de proteger y exigir el respeto de los derechos humanos de las personas menores de edad, de manera que se garantice el ejercicio pleno de sus derechos; así, se construyan relaciones armoniosas e inclusivas que permitan vivir una cultura de paz.

76. La comunidad educativa tiene la responsabilidad de trabajar en la prevención de la violencia. En México las expresiones de violencia con mayor incidencia dentro de las escuelas son el abuso sexual infantil, el acoso escolar y el maltrato en las escuelas por lo tanto, es necesario que las autoridades educativas brinden protección a las y los estudiantes, así como apoyo que favorezca el logro de una educación de calidad a la que tienen derecho las niñas, niños y adolescentes de todo el país.

77. En este sentido, una de las principales acciones que debe ser emprendida es la **prevención de la violencia en el ámbito escolar** misma que debe orientarse a reducir y detener el daño que ésta genera. Por tanto, es un proceso intencionado que incluye dos niveles de actuación, a ejecutarse dentro de la escuela y que, a su vez, puede incidir incluso fuera de ella. Los componentes de la prevención son el **evitar** y **detener**.

78. El evitar se refiere a aquellas acciones que procuran impedir la aparición de la violencia e incidir en su erradicación, en casos en los que se maltrata por motivos de pertenencia étnica, lengua, género, prejuicios, discapacidad, disciplina, educación, crianza y orden o bien por omisión. Estas acciones abarcan los siguientes campos:

- La promoción del buen trato y respeto a la dignidad humana, poniendo de manifiesto su factibilidad y los beneficios individuales, familiares, comunitarios y sociales que se pueden obtener al practicarlos.
- Inhibición de la violencia a través del reconocimiento y desnaturalización de su ejercicio y del conocimiento de sus consecuencias individuales, familiares, sociales y jurídicas, así como el desarrollo de habilidades socioemocionales que favorezcan la resolución no violenta de los conflictos interpersonales.

79. Mientras que en el detener, las acciones apuntan a cesar la violencia existente, a través de detectar y atender situaciones de riesgo, identificar a los posibles agredidos/as, y construir conciencia del daño de las conductas violentas, con el objetivo de evidenciar y detener la evolución del daño individual, familiar y/o social. Se requiere de una comunidad escolar capaz de inhibir las conductas violentas y el abuso, a través de acciones tendentes a favorecer el desarrollo de seres humanos integrales que generen espacios y ambientes de convivencia armónicos y pacíficos.

80. En concreto, todas y todos deben estar alerta y trabajar en el desarrollo adecuado de las y los estudiantes, empezando por fortalecer aquellas habilidades sociales y emocionales que favorecen la inclusión, el respeto a la diversidad y la convivencia; posteriormente, saber qué hacer ante la presencia de situaciones o conductas relacionadas con abuso sexual infantil, acoso escolar o maltrato.

81. El abuso sexual infantil, acoso y maltrato limitan el cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes, afecta su desarrollo pleno, causando baja autoestima, trastornos del sueño y de la alimentación, genera estrés, ansiedad, conflictos emocionales y depresión; bajo rendimiento académico, ausentismos y deserción escolar que pueden perdurar y empeorar en la edad adulta.

82. Al respecto, resulta necesario precisar el marco conceptual de estas expresiones de violencia hacia niñas, niños y adolescentes. La dominación o abuso de poder ocurre cuando el o los sujetos a quienes se aplica el poder están incapacitados de ejercer resistencia, derivado de una relación o vínculo familiar, sentimental, de confianza, de custodia, laboral, formativo, educativo, de cuidado, religioso o de cualquier otro que implique dependencia o subordinación de la persona agredida respecto a la persona que agrede, incluyendo a quien tenga un cargo público o se ostente en él, afectando negativamente su libertad, dignidad y produciendo daño[47].

- **Violencia sexual en el ámbito educativo.**

83. Una de las formas de violencia en el ámbito escolar, es aquella en la cual la autoridad educativa (directivos, profesores y demás personal) fallen en su deber de cuidado y el maltrato escolar, es un tipo de violencia que se define como la “conducta consistente en hacer uso intencional de la fuerza o poder expresado a través de la violencia física, psicológica y/o negligencia por cualquier trabajador al servicio de la educación hacia el o los estudiantes, afectado su bienestar y proceso educativo”.[48]

84. En este apartado, este Organismo retoma algunos razonamientos establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia emitida el 24 de junio de 2020, en el caso Guzmán Albarracín y otras *vs*. Ecuador, la cual constituye el primer criterio respecto de la violencia sexual contra una niña específicamente en el ámbito educativo, puntualizando que en hechos de violencia sexual en el ámbito educativo, se genera una

[47] Concepto basado en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia de las víctimas de estos delitos.
[48] Ver el glosario de los “Lineamientos para la Atención de quejas o denuncias por Violencia, Maltrato, Acoso Escolar y/o Abuso Sexual Infantil, en los Planteles de Educación Inicial, Básica, Especial y para Adultos en el Distrito Federal”, pp. 25 y 26.

estrecha relación con las obligaciones correlativas al derecho de una mujer a una vida libre de violencia y aquellas relacionadas a la protección de niñas y niños y el derecho a la educación.

85. En esa resolución la Corte señaló que los derechos a la integridad personal y a la vida privada, establecidos en los artículos 5 y 11 de la Convención Americana, conllevan libertades, entre las que se encuentra la libertad sexual y el control del propio cuerpo, que pueden ser ejercidas por personas adolescentes en la medida en que desarrollan la capacidad y madurez para hacerlo.

86. Atendiendo a la Convención de Belém do Pará, que establece el derecho de toda mujer a una vida libre de violencia en su artículo 3, precisó que el concepto de "violencia" que se utiliza para el examen de la responsabilidad estatal […], no se limita a la violencia física, sino que comprende "cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado", de conformidad con el artículo 1 de la Convención de Belém do Pará.

87. El artículo 6 del mismo tratado señala que el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia incluye el derecho de la mujer "a ser libre de toda forma de discriminación" y a "ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación". En el mismo sentido el artículo 2 de ese instrumento internacional menciona expresamente el acoso sexual en instituciones educativas como una forma de violencia contra la mujer.

88. La Convención de Belém do Pará, en su artículo 7, establece deberes específicos para el Estado, que deben adoptarse "por todos los medios apropiados y sin dilaciones", y que incluyen "abstenerse" de realizar acciones o "prácticas" de violencia contra la mujer, "velar" porque los funcionarios estatales no lo hagan y actuar con la "debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar" tales conductas, adoptando las normas legislativas o medidas de otra naturaleza, inclusive administrativas, que sean necesarias para posibilitar dichos fines de prevención y sanción, así como para procurar "erradicar" la violencia señalada.

89. La Convención sobre los Derechos del Niño, se encuentra incluida dentro del *corpus iuris* internacional de protección de niñas, niños y adolescentes, el cual fija el contenido y los alcances del artículo 19 de la Convención Americana, que impone la adopción de "medidas de protección" para niñas y niños[49]. El artículo 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño manda a los Estados Partes a adoptar medidas para "proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo".

90. Precisó la Corte que el Comité de los Derechos del Niño entendió que el término "violencia" abarca "todas las formas de daño a los niños enumeradas en el artículo 19, párrafo 1" de la Convención sobre los Derechos del Niño. Explicó que, aunque "[e]n el lenguaje corriente se suele entender por violencia únicamente el daño físico y/o el daño intencional", el uso por parte del Comité de la voz "violencia" no debía entenderse como un modo de "minimizar los efectos de las formas no físicas y/o no intencionales de daño (como el descuido y los malos tratos psicológicos, entre otras), ni la necesidad de hacerles frente"[50]. En el mismo sentido, el Experto independiente de las Naciones Unidas para el estudio de la violencia contra los niños, ha considerado el concepto de "violencia" contra niñas o niños a partir del artículo 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño, refiriendo, igualmente, la "definición recogida en el 'Informe mundial sobre la violencia y la salud' (2002): el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra un niño, por parte de

[49] Cfr. Caso de los "Niños de la Calle" (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala. Fondo, párr. 194, y Caso V.R.P., V.P.C. y otros Vs. Nicaragua, párr. 42. En ese sentido, la Corte ha señalado que tales "medidas de protección" pueden "ser interpretad[as] tomando en cuenta otras disposiciones" (Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de julio de 2004. Serie C No. 110, párr. 164 y, en el mismo sentido, Caso Ramírez Escobar y otros Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 9 de marzo de 2018. Serie C No. 351, párr. 149). Es preciso dejar sentado que Ecuador ratificó el 23 de marzo de 1990 la Convención sobre los Derechos del Niño, que entró en vigor el 2 de septiembre del mismo año.

[50] Comité de los Derechos del Niño, Observación General No. 13, Derecho del niño a no ser objeto de ninguna forma de violencia, 18 de abril de 2011, Doc. CRC/C/GC/13, párr. 4.

una persona o un grupo, que cause o tenga muchas probabilidades de causar perjuicio efectivo o potencial a la salud del niño, a su supervivencia, desarrollo o dignidad"[51]

91. Dentro de las medidas especiales de protección de niñas y niños y entre los derechos reconocidos a éstos en el artículo 19 de la Convención Americana, figura de manera destacada el derecho a la educación, que favorece la posibilidad de gozar de una vida digna y contribuye a prevenir situaciones desfavorables para el menor y la propia sociedad"[52].

92. El derecho a la educación surge del artículo 28 de la Convención sobre los Derechos del Niño, del artículo 26 de la Convención Americana y del artículo 13 del Protocolo de San Salvador. Ahora bien, una educación que se imparta vulnerando derechos humanos no permite cumplir los cometidos señalados, resulta frontalmente contraria a los mismos y, por ende, violatoria del derecho a la educación. Los Estados deben adoptar acciones adecuadas para prevenir violaciones a los derechos humanos en el curso del proceso educativo de niñas y niños[53]. En el cumplimiento de estos deberes, es preciso que los Estados tengan en consideración la gravedad y las especificidades que presentan la violencia de género, la violencia sexual y la violencia contra la mujer, todas las cuales son una forma de discriminación[54].

93. Las niñas y niños tienen, entonces, derecho a un entorno educativo seguro y a una educación libre de violencia sexual. Por otra parte, como indicó el Comité DESC, la educación debe ser "accesible" a todas las personas, "especialmente a [quienes integran] los grupos m[á]s vulnerables de hecho y de derecho, sin discriminación por ninguno de los motivos prohibidos". Dicho Comité resaltó también que la prohibición de discriminación en la educación "se aplica plena e inmediatamente a todos los aspectos de la educación y abarca todos los motivos de discriminación rechazados internacionalmente"[55].

94. Entonces, los Estados deben "adoptar las medidas necesarias para prevenir y prohibir toda forma de violencia y abuso, incluidos los abusos sexuales, […] en las escuelas por el personal docente"[56], que goza, por su condición de tal, de una situación de autoridad y confianza respecto de estudiantes e incluso de sus familiares. Debe tenerse en cuenta, al respecto, la particular vulnerabilidad de las niñas y adolescentes, considerando que ellas "con

---

[51] Informe del experto independiente para el estudio de la violencia contra los niños, de las Naciones Unidas, 29 de agosto de 2006, Doc. A/61/299, párr. 8.

[52] Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Opinión Consultiva OC 17/02, párr. 84

[53] Sin perjuicio de otras acciones más específicas, entre las medidas de prevención que deben adoptar los Estados se incluyen aquellas dirigidas a "[c]ombatir las actitudes que perpetúan la tolerancia y la aceptación de la violencia en todas sus formas, incluida la violencia basada en el género, […] y otros desequilibrios de poder". Resultan relevantes las medidas "educativas", que "deben combatir las actitudes, tradiciones, costumbres y comportamientos que toleran y promueven la violencia contra los niños, y fomentar un debate abierto sobre la violencia". Esas medidas "[d]eben ayudar al niño a prepararse para la vida cotidiana, adquirir conocimientos y participar en la sociedad, y mejorar las capacidades de los cuidadores y profesionales que trabajan con niños" (Comité de los Derechos del Niño, Observación General No. 13, párrs. 47 y 44, respectivamente). La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y ONU Mujeres han referido "áreas estratégicas" relevantes para lograr una "respuesta contundente a la violencia de género en el ámbito escolar", sin perjuicio de la necesidad del análisis de "cada contexto". Entre ellas destacaron la relevancia de brindar educación para "transformar las casusas de fondo que propician la violencia", aspecto en el que mencionaron la importancia de la existencia de planes de estudios para prevenirla y para promover la igualdad de género, así como la "formación para que el personal educativo entregue herramientas para prevenir y responder a la violencia de género en el ámbito escolar". También señalaron, entre otros aspectos, la necesidad de "políticas y planes de acción nacionales" que hagan posible la prevención de la violencia, la "calidad del entorno" educativo, que debe ser seguro, la existencia de "procedimientos y mecanismos claros, seguros y accesibles para denunciar los incidentesacciones" y acciones de "monitoreo, evaluación e investigación (UNESCO y ONU Mujeres, Orientaciones Internacionales: violencia de género en el ámbito escolar, 2019, págs. 14 y 15).

[54] Estas formas de violencia se encuentran frecuentemente imbricadas, pues presentan una estrecha relación. Al respecto, UNESCO y ONU Mujeres han señalado que "[l]a violencia de género en el ámbito escolar […p]uede definirse como actos o amenazas de violencia sexual, física o psicológica que ocurren en las escuelas y sus alrededores, perpetrados como resultado de normas y estereotipos de género, y reforzados por dinámicas de poder desiguales. […E]s compleja y multifacética [e i]ncluye diferentes manifestaciones de violencia física, sexual y/o psicológica, como abuso verbal, bullying, abuso y acoso sexual, coerción y agresión, y violación. A menudo, estas diferentes formas de violencia se superponen y refuerzan mutuamente" (UNESCO y ONU Mujeres, Orientaciones Internacionales: violencia de género en el ámbito escolar, pág. 20). Con base en señalamientos de la UNESCO, el Instituto O'Neill, en su amicus curiae, resaltó que la violencia sexual en particular afecta las "perspectivas educativas, oportunidades de empleo y desarrollo de[l] proyecto de vida" de las niñas víctimas. El escrito de amicus curiae remitido por CLACAI destacó la "educación sexual integral como medida de prevención a todas las formas de violencia sexual", en tanto se realice con "enfoque de género" y de forma apropiada para la edad. Explicó cómo dicha educación favorece el ejercicio de niñas o niños de sus derechos sexuales y reproductivos.

[55] Comité DESC, Observación General No. 13, El Derecho a la educación (artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales). Diciembre de 1999, Doc. E/C.12/1999/108, párrs. 6 y 31. El Comité aclaró que la obligación de no discriminación "no está supeditada ni a una implantación gradual ni a la disponibilidad de recursos".

[56] Comité de los Derechos del Niño, Observación General No. 4, La salud y el desarrollo de los adolescentes en el contexto de la Convención sobre los Derechos del Niño, julio de 2003, Doc. CRC/GC/2003/4, párr. 17.

frecuencia están expuestas a abuso sexual por parte de […] hombres mayores"[57]. En relación con lo expuesto, el Comité de los Derechos del Niño ha señalado que los Estados tienen la "obligación estricta" de adoptar todas las medidas apropiadas para tratar la violencia contra niños y niñas. La obligación "se refiere a una amplia variedad de medidas que abarcan todos los sectores públicos y deben aplicarse y ser efectivas para prevenir y combatir toda forma de violencia", incluso mediante la aplicación de sanciones efectivas por su realización[58].

95. Así, los deberes de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y de adoptar medidas de protección respecto de niñas y niños, así como el derecho a la educación, conllevan la obligación de proteger a las niñas y adolescentes contra la violencia sexual en el ámbito escolar. También, por supuesto, de no ejercer esa violencia en dicho ámbito. En ese sentido, debe tenerse en cuenta que las personas adolescentes, y las niñas en particular, suelen tener más probabilidades de sufrir actos de violencia, coacción y discriminación[59]. Los Estados deben establecer acciones para vigilar o monitorear la problemática de la violencia sexual en instituciones educativas y desarrollar políticas para su prevención[60]. Deben existir, también, mecanismos simples, accesibles y seguros para que los hechos puedan ser denunciados, investigados y sancionados[61].

- **Violencia institucional.**

96. Las violencias contra las mujeres y niñas pueden ser perpetradas por particulares o por servidores públicos; en el segundo de los casos, la más normalizada es la **violencia institucional**, que se refiere a "los actos u omisiones de las personas con calidad de servidor público que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia"[62].

97. Por su parte, niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir una vida libre de toda forma de violencia, y a que se resguarde su integridad personal con el fin de lograr las mejores condiciones de bienestar y el libre desarrollo de su personalidad[63].

---

[57] Comité CEDAW, Recomendación general No 24, Las mujeres y la salud, 1999, Doc. A/54/38/Rev.1 cap. I, párr. 12.

[58] El Comité aclaró que la obligación se refiere a toda forma de violencia contra niñas o niños, por lo que "no puede interpretarse en el sentido de que se aceptan algunas formas de violencia". Aseveró que los Estados deben "establec[er] la prohibición absoluta de toda forma de violencia contra los niños en todos los contextos, así como sanciones efectivas y apropiadas contra los culpables". Además, es pertinente destacar que la obligación de proteger a las niñas y los niños contra toda forma de violencia abarca medidas legislativas, inclusive presupuestarias. También requiere medidas administrativas. Resultan pertinentes a la obligación de prevención, además, las indicaciones del Comité de los Derechos del Niño sobre la amplia gama de acciones que este deber implica, que abarcan "políticas, programas y sistemas de vigilancia y supervisión necesarios para proteger al niño de toda forma de violencia", inclusive políticas "intra e interinstitucionales de protección del niño", y el "establec[imiento] de un sistema nacional amplio y fiable de recopilación de datos que garantice la supervisión y evaluación sistemáticas de sistemas (análisis de impacto), servicios, programas y resultados a partir de indicadores ajustados a normas universales y adaptados y orientados a metas y objetivos establecidos a nivel local". Las acciones de prevención incluyen, asimismo, acciones judiciales. (Cfr. Comitéde los Derechos del Niño, Observación General No. 13, párrs. 37, 39, 40, 41, 42, 46 y 54.) En particular respecto de adolescentes, el Comité de los Derechos del Niño "destac[ó] que promover la identificación de riesgos potenciales por parte de los adolescentes y elaborar y aplicar programas para mitigarlos aumentará la eficacia de la protección". Agregó que "[g]arantizarles el derecho a ser escuchados, impugnar las violaciones de sus derechos y obtener reparación permite a los adolescentes ir haciéndose cargo progresivamente de su propia protección". (Comité de los Derechos del Niño, Observación General 20 sobre la efectividad de los derechos del niño durante la adolescencia, párr. 19.)

[59] Cfr. Comité DESC, Observación General No 22 relativa al derecho a la salud sexual y reproductiva (artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), 2 de mayo de 2016, Doc. E/C.12/GC/22, párr. 30.

[60] El Comité de los Derechos del Niño ha expresado que los Estados tienen las "obligaciones especiales" de "actuar con la debida diligencia, prevenir la violencia o las violaciones de los derechos humanos, proteger a los niños que han sido víctimas o testigos de violaciones de los derechos humanos, investigar y castigar a los culpables, y ofrecer vías de reparación de las violaciones de los derechos humanos" (Comité de los Derechos del Niño, Observación General No. 13, párr. 5). UNESCO y ONU Mujeres han señalado que la necesidad de respaldar con investigaciones y datos las acciones sobre violencia de género en el ámbito escolar, señalando la relevancia de acciones de "monitoreo, evaluación e investigación" (UNESCO y ONU Mujeres, Orientaciones Internacionales: violencia de género en el ámbito escolar, pág. 15). Las políticas estatales, conforme indicó la perita Gauché Marchetti, deben incluir "[a]umentar la capacidad" de quienes trabajan con niños o niñas, por medio de acciones de formación.

[61] UNESCO y ONU Mujeres indicaron que "deben existir procedimientos y mecanismos claros, seguros y accesibles para denunciar los incidentes, ayudar a las víctimas y derivar los casos a las autoridades apropiadas. Las respuestas a la violencia de género en el ámbito escolar deberían garantizar la disponibilidad de mecanismos de denuncia fácilmente accesibles, sensibles a los niños y confidenciales, servicios de atención de salud, incluyendo asesoramiento y apoyo, y remitirse a la aplicación de la ley" (UNESCO y ONU Mujeres, Orientaciones Internacionales: violencia de género en el ámbito escolar, pág. 14).

[62] Artículo 14 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Zacatecas.

[63] Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, adoptada por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, Washington, D. C., 15 de junio de 2015, artículo 9º, párrafo segundo.

98. Es importante concluir que el hecho de prevenir y salvaguardar la integridad de niñas, niños y adolescentes es responsabilidad de las personas adultas que tienen a cargo su guardia y custodia, tutela, o a quienes por motivo de sus funciones o actividades los tengan bajo su cuidado. En el hogar, les corresponde a los padres, madres o tutores/as y en el espacio escolar a las personas adultas que integran la comunidad educativa[64].

- **Abuso sexual infantil (ASI)**

99. El abuso sexual infantil se refiere a la interacción del adulto que ejerce poder y/o control sobre niñas, niños y adolescentes para estimulación sexual de sí mismo, hacia el menor de edad y/o algún testigo, pudiendo existir o no contacto físico.

100. El delito de abuso sexual comprende la ejecución de un acto sexual sobre la niña o niño; realizar actos en los que el agresor muestre, exponga o exhiba sus órganos genitales, o bien lo obligue a observarlo o a ejecutarlo. Este delito se agrava si se ejerce violencia física o moral o si se comete en contra de dos o más personas, cuando el agresor es una persona de confianza del agredido. Igualmente hay actos que pueden llegar a constituir violación cuando el agresor introduce su pene en el cuerpo de una niña o niño menor de 12 años por vía anal, vaginal o bucal; o bien introduce cualquier elemento, instrumento o parte del cuerpo humano distinto al pene, con fines sexuales.

101. En general, las conductas descritas se engloban en el concepto “abuso sexual” utilizado internacionalmente; sin embargo, en México existen tipos penales que protegen el libre desarrollo de la personalidad cometidos contra niñas, niños y adolescentes o personas incapaces que, dependiendo de la entidad federativa y la forma de la comisión del hecho, pueden ser: violación, abuso sexual, acoso sexual, estupro, incesto, pornografía, entre otros. Para la tipificación legal de los mismos la autoridad competente (Ministerio Público) verificará la existencia de la descripción de cada delito. También dependiendo el Estado donde se cometa, se prevé una pena para las personas que teniendo conocimiento del abuso y/o violación contra una niña o niño, no acudan a denunciar el hecho[65].

102. También se considera abuso sexual cuando quien ejerce ese poder y/o control es una niña o niño de mayor edad que la del agredido.

103. El artículo 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño, define a la violencia contra niñas, niños y adolescentes como toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual. En ese entendido, el abuso sexual y/o la violación son, desde luego, formas de violencia contra la niñez y adolescencia.

104. En este sentido, la escuela tiene una función social que debe responder a las necesidades y realidades actuales, estar en constante preparación para desarrollar y fomentar habilidades en las/los estudiantes, como una estrategia para prevenir el aprendizaje de conductas violentas y su desaprendizaje en caso de presentarlas[66]. De igual manera, tiene la responsabilidad ética de generar espacios inclusivos, donde las/los estudiantes puedan ejercer sus derechos en condiciones favorables, sumando acciones afirmativas para aquéllos que presentan mayor vulnerabilidad y para ello se debe tener en la mira los **factores de riesgo y factores protectores**.

105. Los factores de riesgo y protectores son aquéllos que disponen y pueden prevenir que el/la estudiante resulte agredida/o, o bien trascienda a agresor, en este caso en la escuela. Es importante no solo prestar atención a los factores de riesgo sino también darle un peso importante a los de protección, los cuales priman en una intervención de prevención. En la

---

[64] SEP. *Orientaciones para la prevención, detección y actuación en casos de abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato en las escuelas de educación básica.* Disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/docs/Orientaciones_211216.pdf

[65] SEP, Protocolo para la Atención y Prevención de la Violencia Sexual en las Escuelas de Educación Inicial, Básica y Especial en la Ciudad de México, 2016.

[66] Castro Santander, A. y Reta Bravo, C. (2014) Bullying blando, bullying duro y ciberbullying. Homosapiens Ediciones, Rosario.

siguiente tabla se pueden observar factores de riesgo y protección, así como los niveles en los que tienen impacto[67]:

Factores de Riesgo	Niveles	Factores de Protección
Posible maltrato psicológico, carencia de habilidades personales y sociales, escasa autoafirmación, falta de comunicación, barreras para el aprendizaje, entre otros.	niñas, niños y adolescentes	Buen desarrollo de habilidades personales y sociales, asertividad, afrontamiento.
Carencia de valores, pautas de actuación en situaciones conflictivas, egocentrismo, trato discriminatorio.	Escuela (Personal escolar)	Valores, cooperación, empatía, resolución de conflictos, inclusión, equidad, igualdad, atención eficaz a la diversidad.
Estilo autoritario y coercitivo, falta de límites, falta de respeto, inadecuado afrontamiento de las situaciones, aislamiento familiar.	Familia	Estilo democrático, saber escuchar, negociación, respeto mutuo, buena comunicación, relación con el centro educativo.
Modelos de violencia y acoso, alta conflictividad social, valores sociales competitivos, prejuicios y discriminación.	Sociedad	Resolución de conflictos, alternativas de ocio y grupos de apoyo, recursos sociales, promoción de la tolerancia, igualdad, mediación.

106. El Estado realiza acciones para la prevención, detección y actuación en casos de abuso sexual infantil y, para ello, es necesario establecer condiciones interinstitucionales, para que las escuelas, en cualquier evento relacionado con salvaguardar la integridad de niñas, niños y adolescentes, den seguimiento a los casos que se consideren necesarios.

- **Responsabilidades mínimas de la comunidad educativa.**

107. Algunas responsabilidades mínimas, que cada centro escolar puede implementar, de manera diferenciada, para contribuir puntualmente a prevenir situaciones de abuso sexual infantil, con la participación de las madres, padres y tutores/as; docentes; directores (as) y subdirectores (as) administrativos y de supervisión, así como personal administrativo y/o personas que no son docentes, que forman parte del plantel[68], se desarrollan a continuación.

- **Responsabilidades de madres, padres y tutores/as:**

108. Corresponde a las madres, a los padres y a los tutores o tutoras:

- Conocer los documentos normativos y de organización escolar, expedidos por la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Educación de Zacatecas y los de carácter interno del plantel.
- Conocer la información de la autoridad educativa y administrativa, con quien debe recurrir para la aplicación de las acciones de prevención y/o en caso necesario, ejecutar acciones de actuación.
- Observar y estar alerta ante cualquier cambio de conducta del alumnado dentro y fuera del aula, informar a la autoridad inmediata cualquier hallazgo y/o indicador, asociado a la posibilidad de abuso sexual infantil.
- Acudir a la escuela en caso de observar alguna conducta anómala en los menores de edad.
- En caso de llegar a algún acuerdo escrito con la escuela, responsabilizarse de probar ante la institución educativa su cumplimiento.
- Firmar lo acordado al momento que se hagan los Acuerdos Escolares, asumiendo el compromiso de su cumplimiento[69].

109. Es obligación de toda persona que tenga conocimiento de casos de niñas, niños y adolescentes que sufran o hayan sufrido, en cualquier forma, violación de sus derechos,

[67] Tabla tomada del Protocolo del Estado de Zacatecas para la Prevención, Detección y Actuación en casos de abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato en escuelas de educación básica.
[68] Basado en la *Guía Operativa para la Organización y Funcionamiento de los Servicios de Educación Inicial, Básica y Especial para Escuelas Particulares en el Distrito Federal*, Incorporadas a la SEP, p. 14
[69] *Protocolo del Estado de Zacatecas para la Prevención, Detección y Actuación en casos de abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato en escuelas de educación básica*, p.24.

como en el caso del abuso sexual, hacerlo del conocimiento inmediato de las autoridades competentes[70]. **Guardar silencio sobre un acto de abuso sexual infantil, implica corresponsabilidad por omisión**; independientemente del compromiso firmado en acuerdo escolar, es obligación hacerlo del conocimiento.

- **Responsabilidades de docentes**

110. Por su parte, las y los docentes, tienen las siguientes responsabilidades:

- Conocer y aplicar los documentos normativos y de organización escolar expedidos por la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Educación de Zacatecas y los de carácter interno del plantel.
- Contar con formación en derechos humanos para trabajar con el plan y los programas de estudio, desde un enfoque de derechos y favorecer los aprendizajes relacionados con valores, actitudes y habilidades en educación para la salud, educación integral en sexualidad, prevención de la violencia, entre otros.
- Conocer la LGDNNA, a través de talleres de conformidad a la estructura jerárquica.
- Observar y estar alerta ante cualquier cambio de conducta del alumnado dentro y fuera del aula, informar a la autoridad inmediata cualquier hallazgo y/o indicador asociado a la posibilidad de abuso sexual infantil.
- Aplicar durante la jornada escolar las acciones que se señalen en este documento.
- Reportar a su autoridad inmediata cualquier situación de riesgo para niñas, niños y adolescentes que se observe en las áreas de servicio, patios y demás instalaciones del plantel.
- Firmar y cumplir con sus responsabilidades y mecanismos[71].

- **Responsabilidades del personal administrativo y/o personas que no son docentes que forman parte del plantel**

111. En el mismo sentido, el personal administrativo o que no es docente, pero formal parte del plantel educativo, deberán:

- Conocer y aplicar los documentos normativos y de organización escolar, expedidos por la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Educación de Zacatecas y los de carácter interno del plantel.
- Conocer la LGDNNA a través de talleres, conforme a la estructura jerárquica.
- Aplicar durante la jornada escolar, las acciones que se señalan en este documento e informar a la autoridad inmediata cualquier hallazgo y/o indicador asociados a la posibilidad de abuso sexual infantil y documentarlo.
- Reportar a su autoridad inmediata cualquier situación de riesgo para niñas, niños y adolescentes que se observe en las áreas de servicio, patios e instalaciones del plantel.
- Firmar y cumplir con sus responsabilidades y mecanismos.

- **Responsabilidades de directores(as) y subdirectores(as) administrativos**

112. En adición, corresponden a las y los directores, así como a las y los subdirectores administrativos, las responsabilidades que a continuación se señalan:

- Dar a conocer a la comunidad educativa los documentos normativos y de organización escolar, expedidos por la Secretaría

[70] Artículo 12 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
[71] *Protocolo del Estado de Zacatecas para la Prevención, Detección y Actuación en casos de abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato en escuelas de educación básica*, p.26.

de Educación Pública, la Secretaría de Educación y los de carácter interno del plantel.
- Verificar que, durante las jornadas escolares, se apliquen las acciones que se señalan en este documento e informar a la autoridad inmediata cualquier hallazgo y/o indicador asociados a la posibilidad de abuso sexual infantil y documentarlo.
- Generar las condiciones para que ellos mismos, los docentes y todo el personal del plantel educativo se formen y actualicen continuamente en materia de derechos humanos.
- Conocer la LGDNNA a través de talleres, conforme a la estructura jerárquica.
- Establecer en los espacios colegiados y Consejos Técnicos Escolares las estrategias de revisión de acciones, para la prevención de abuso sexual infantil.
- Documentar todas las actuaciones relacionadas con la prevención.
- Firmar y cumplir con sus responsabilidades y mecanismos[72].

❖ **Responsabilidades de los supervisores**

113. Finalmente, las y los supervisores tienen las siguientes responsabilidades:
- En el marco de las atribuciones establecidas para la supervisión de planteles públicos y privados, la supervisión tendrá que verificar que todas las responsabilidades y obligaciones de los actores escolares de la comunidad que se desprenden de este documento, sean cumplidas a través de evidencias documentadas.
- Contar con formación en los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, en especial sobre prevención del abuso sexual infantil para orientar y enfocar los trabajos escolares que se establecen en las rutas de mejora y propiciar el fortalecimiento de los aprendizajes.
- Promover acciones pedagógicas y psicológicas que orienten a la convivencia escolar armónica, pacífica e inclusiva y a la integridad de las niñas, niños y adolescentes.
- Conocer la LGDNNA a través de talleres, de conformidad a la estructura jerárquica.
- Confirmar con base en evidencias documentales, estrategias educativas y medidas de protección en los ambientes escolares la aplicación de las acciones que se señalan en estas Observaciones de Prevención, e informar a la autoridad inmediata, cualquier hallazgo y/o indicador asociado a la posibilidad de abuso sexual infantil y documentarlo[73].

114. Como parte de las responsabilidades mínimas enlistadas para personas adultas a cargo de niñas, niños y adolescentes en el ámbito escolar, la Secretaría de Educación Pública ha generado una guía de observación de apoyo para identificar indicadores de riesgo de abuso sexual infantil[74], entre los que se encuentran:

❖ **Indicadores de riesgo de abuso sexual infantil:**

a. Temor de ir al baño.
b. Temor o nerviosismo ante la presencia de un adulto en concreto (el agresor).
c. Cambios notorios en los hábitos alimentarios (por exceso o disminución).
d. Crisis de llanto sin explicación.
e. Sensibilidad extrema.
f. Dificultades en la integración al grupo de iguales.
g. Negarse a ir o permanecer en la escuela.
h. Incontinencia urinaria.
i. Incontinencia fecal.
j. Tendencia a aislarse.

[72] Idem., p.28
[73] Idem., p.31-32
[74] Idem., p.34-35

k. Fugas del hogar.
l. Manifestaciones auto-agresivas de distinto tipo (cortarse, golpearse, ponerse en situaciones de riesgo físico, arrancarse el cabello, rascarse hasta sangrar y causarse otras lesiones serias que comprometan su salud).
m. Malestares físicos constantes.
n. Deserción escolar.
o. Cambios en la vestimenta o aspecto.
p. Dificultades para concentrarse en las tareas escolares.
q. Desinterés de las actividades vinculadas al aprendizaje y a la escuela.
r. Evasión de la participación en juegos o actividades grupales.
s. Negativa repentina a participar en actividades físicas.
t. Descenso brusco del rendimiento escolar.
u. Cambios bruscos en su estado de ánimo.
v. Tendencia a quejarse mucho, ser exigente o aislado.

❖ **Indicadores específicos de riesgo de abuso sexual infantil:**

a. Molestias evidentes (o verbalizadas) en genitales.
b. Dificultades para caminar o sentarse.
c. Uso de información inusual para la edad sobre temas sexuales.
d. Sensibilidad extrema al contacto o acercamiento físico.
e. Ataques de ira.
f. Mostrarse triste.
g. Miedo a quedarse a solas con una persona en particular.
h. Conocimiento de temas sexuales y/o conducta inapropiada para un niño o niña de su edad.
i. Escribe, dibuja, juega o sueña con imágenes atemorizantes o sexuales.
j. Habla de un nuevo amigo o amiga mayor.
k. De repente, tiene dinero, juguetes u otros regalos sin motivo alguno.
l. Forzar a otras personas a realizar juegos sexuales.

❖ **Recomendaciones generales en casos de situaciones de abuso sexual infantil[75]:**

Es recomendable	**Se debe evitar**
• Recibir la información inmediatamente. • Estar disponible para escuchar al niño en el momento que lo solicite, con tiempo y la privacidad adecuadas. Cuidando en NO buscar interrogarlo.	• Hacer preguntas/entrevista • Postergar para otro momento la escucha. • Manifestar alarma ante el relato. • Pedir que muestre partes del cuerpo.
• Creer en el relato del niño o el adolescente y decírselo: "siempre voy a creer en lo que me digas".	• Insistir en que el niño relate hechos o responda preguntas que no quiere contestar.
• Manifestar que se confía en él y en lo que cuenta.	• Cuestionar lo que el niño está relatando.
• Explicarle que no tiene la culpa de lo que le sucede. • Se pueden incluir mensajes como: *"Las personas mayores están para cuidar a los niños. Siempre que un adulto lastima a un niño es responsabilidad del adulto, porque él sabe que eso está incorrecto"* *"Si una persona adulta está haciendo algo que te incomoda, debes saber que él es responsable de lo que está sucediendo, no tú (aunque sea una persona conocida, a quien quieres mucho y aunque te haya dicho que está mal si lo dices).*" La transmisión de estos mensajes aliviarán la angustia que está sintiendo la niña, niño o adolescente le ayudarán a	• Realizar juicios de valor sobre los padres, sobre él mismo o sobre su agresor. • Criticar o actuar prejuiciosamente.

[75] Castro Santander, A. (2016) *Gestión escolar del maltrato y el abuso infantil: familia, escuela y entorno.* Homo Sapiens Ediciones: Buenos Aires.

sentirse protegido y generarán un clima de confianza para que pueda hablar de lo sucedido	
• Primero escuchar sin interrumpir todo lo que el niño quiera expresar y luego organizar las preguntas	• Plantear preguntas cerradas, que sólo pueden ser respondidas con un “sí” o con un “no”. • Inducir y/o sugerir respuestas. • Verbalizar hipótesis sobre lo sucedido.
• Evitar la duplicidad de relatos.	• Pedir que repita lo ocurrido ante otras personas, en reiteradas ocasiones
• Comunicarle que se va a realizar una consulta con personal especializado y que de esta forma se le podrá proteger y apoyar mejor. Reitere que estará bien y que todo es para que se encuentre mejor. • No prometer que se mantendrá el secreto a las autoridades. • Agradecerle por contar lo sucedido y decirle que ha sido muy valiente en hacerlo, porque de esa forma se protegerá él y podrá ayudar a que a otros niños no les pase lo mismo.	• Realizar acciones que lo involucren sin explicarle de qué se tratan.
• Asegurarle que no le ocurrirá nada y que se le va a apoyar, expresándoselo con atención y afecto. • Dejar abiertos los canales de comunicación y mencionarle que se estará ahí cuando necesite hablar, sin insistir en acercamientos.	• Manifestar enojo y culparlos por lo que sucede.
• Si es una situación de abuso fuera del contexto familiar, debe comunicarse a la madre, padre o tutor lo manifestado por el niño. • Si hace referencia a una situación de abuso cometido por algún integrante de la familia, se sugiere comunicarse con algún adulto protector que indique el niño.	• Prejuzgar. Acercarse a los padres de manera punitiva. Hablar de manera acusadora. • Avanzar sobre cuestiones de la vida privada de los padres, que no tienen relación con los hechos que pueden afectar al niño.

Tabla tomada del Protocolo del Estado de Zacatecas para la Prevención, Detección y Actuación en casos de abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato en escuelas de educación básica.

- **Prevención de maltrato infantil:**

Las responsabilidades mínimas que se tienen con relación a esta expresión de violencia se comparten con las arriba mencionadas. De igual forma los **indicadores de riesgo de maltrato** son similares a los de abuso, sumándose:

a) Físicos: moretones, quemaduras, mordeduras, falta de pelo, fracturas, laceraciones, raspaduras, heridas visibles.
b) Poca higiene personal, falta de cuidado médico y/o dental, enfermedades frecuentes.

- **Indicadores específicos de riesgo de maltrato**:

a) Cautela o rechazo al contacto físico con adultos en la escuela.
b) Sometimiento ante pares y adultos.
c) Aprensión ante el llanto de otros niños o niñas.
d) Conductas extremas (agresividad o rechazos extremos en acercamiento con otros niños, niñas o adultos).
e) Conductas no “esperadas” o difíciles de comprender para quién observa.
f) Temor manifiesto a sus padres, madres o tutores(as) o adultos en casa (expresión de angustia al llegar o finalizar la jornada e irse de la escuela).
g) Supuestos golpes o accidentes fortuitos para justificar las marcas en el cuerpo.
h) Expresiones o quejas de la actuación en algún episodio escolar.

De igual manera, las recomendaciones generales frente a situaciones de maltrato en la escuela se asemejan a las desarrolladas en el apartado de abuso sexual.

115. Es importante señalar que, identificar algún factor de riesgo de abuso o maltrato no garantiza que niñas, niños y adolescentes estén siendo sujetos de estas expresiones de violencia; sin embargo, se recomienda valorar y dar seguimiento a los indicadores que se señalan. Para ello, el personal involucrado en los asuntos concernientes a la comunidad escolar, quienes son pieza clave para el trabajo preventivo.

116. Por ello, será necesario que se capaciten y desarrollen habilidades para actuar con respeto, brindando un buen trato para detectar y atender oportunamente los casos, asegurando el óptimo aprovechamiento de los programas de prevención tanto federales como estatales ya establecidos y promover ambientes de convivencia armónicos, pacíficos e inclusivos que coadyuven a disminuir situaciones de violencia en las escuelas a través del desarrollo de habilidades (emocionales, personales y sociales) en las/los estudiantes, así como brindar estrategias oportunas para la prevención, detección y actuación de los actores involucrados en su educación.

117. Corresponde ahora, realizar un estudio de la evidencia recabada por este Organismo Protector de derechos humanos, y establecer de manera específica los hechos que se encontraron probados para cada una de las autoridades señaladas como responsables, a efecto de establecer, de manera clara y específica, las violaciones a derechos humanos que se acreditaron a cada una de éstas.

A. De las violaciones a derechos humanos atribuidas al PROFESOR AR1.

118. En el presente caso, la **PSICÓLOGA SP1**, realizó diversas llamadas a esta Comisión de Derechos Humanos con la finalidad de denunciar que, en la escuela primaria (...), ubicada en el municipio de (...), Zacatecas, dos niñas que, para esa fecha (04 de noviembre de 2019), cursaban el (...), le platicaron que cuando estaban en (…), su maestro **AR1** (…).

119. Ante la citada denuncia y atendiendo a las facultades de este Organismo, el 12 de noviembre de 2019, se emitió el acuerdo de admisión de queja oficiosa y, el 13 de noviembre de ese mismo año, se procedió a solicitar los informes respectivos, a la Directora de la Institución Educativa, **PROFESORA AR2**. Además, se dio vista a la **DOCTORA SPSEDUZAC2**, entonces Secretaria de Educación del Estado de Zacatecas, para que realizara las acciones que en derecho correspondieran para la atención y solución de este caso, e informara a este Organismo, acerca de las medidas que se estuvieran tomando para resolver la problemática planteada.

120. En esa misma fecha, 12 de noviembre de 2019, personal de psicología de la Unidad de Atención a Víctimas de este Organismo, llevó a cabo una dinámica de buzón en el grupo de (...), de la escuela primaria (...), ubicada en el municipio de (...), Zacatecas, al que hacía 2 ciclos escolares atrás, les impartía clases el **PROFESOR AR1**. En virtud de que en la primera dinámica de buzón se encontraban únicamente 11 niñas y niños, se acudió en una segunda ocasión (13 de noviembre de 2019), en la que se recabaron un total de 18 cartas de niñas y niños del citado grado y grupo.

121. El resultado de la primera diligencia, fue en el sentido de que, de un total de 11 cartas, 2 cartas hacen referencia a los hechos manifestados en la queja (…) y 9 cartas refieren a hechos atribuibles también al profesor (violencia física). Al respecto, de la transcripción literal del contenido de las cartas obtenidas en la dinámica de buzón, se desprendió lo siguiente:

(…)

122. Con este primer reporte, las niñas y los niños del (...) grado de primaria, fueron coincidentes en que, su Profesor de (...) grado, las y los agredía; que, a las niñas, (…) y, a los niños, los golpeaba. Si bien, no refieren de qué forma (…), por lo que hace a la violencia física sí expresaron situaciones donde el Profesor (…).

123. Al no encontrarse el grupo completo, el personal adscrito a esta Comisión se apersonó nuevamente en la escuela primaria (...), por lo que, en una segunda actividad realizada en el mismo grupo, el 13 de noviembre de 2019, se obtuvieron un total de 18 cartas, en donde nuevamente, 2 cartas refieren a hechos de (…) y 12 cartas refieren hechos atribuibles también al profesor por violencia física, además de 3 cartas con hechos diferentes y 1 carta ilegible, las que se transcriben a continuación:

(…)

124. En esta ocasión, se volvió a obtener como resultado, dos cartas que coinciden en que, cuando estuvieron en (...) grado de primaria, su Profesor, (...), agregando que (...). Resulta importante destacar que, en estas dos cartas, la narrativa la hicieron en primera persona, (…). Luego, por lo que hace a la violencia física, (…). Por lo que se advierte que, a dos años de distancia, aun con la resiliencia que tienen las niñas y los niños, fueron capaces de recordar con claridad lo ocurrido en su (...) de primaria e identificar plenamente a su agresor, pues mientras algunos refirieron que fue su Profe "**AR1**", otros señalan que fue su Profesor de (…). Asimismo, varios utilizaron ambos, al expresar que en (…), el profe **AR1**, era quien los (…), es decir, identificaron como su agresor a **AR1**.

125. Una vez que fueron analizadas las cartas de la dinámica de buzón, el personal del área de Atención a Víctimas de este Organismo, concluyó en su reporte de dinámica de buzón, lo siguiente: *(…)*

126. Atendiendo a los resultados de las dinámicas de buzón, y para mejor comprensión de la conclusión a la que se arribó en el referido reporte de dinámica, se hace necesario dividir el análisis de los hechos plasmados por las niñas y los niños, pues se advierte, por un lado, violencia (…) contra niñas y violencia física contra niños.

- Violencia sexual

127. Según la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Zacatecas, la violencia sexual es cualquier acto u omisión realizado por la persona agresora que degrade, dañe o atente contra el cuerpo o la sexualidad de la víctima, que puede consistir en: la imposición mediante la violencia física o psicológica de relaciones sexuales, incluso la ejercida por el cónyuge o la pareja sentimental o afectiva; la explotación o comercio sexual; el acoso, ciberacoso, violaciones a la privacidad sexual u hostigamiento sexuales; la mutilación genital femenina; el empleo de mujeres sin su consentimiento, y de niñas, en pornografía; los delitos contra la libertad sexual e integridad de las personas, señalados en el Código Penal para el Estado, y todos los abusos, agresiones y conductas que atenten o limiten el derecho a la libertad, dignidad, integridad y desarrollo físico y sexual de las mujeres.

128. En ambas diligencias, se obtuvieron 4 cartas. En ellas, las niñas del grupo expusieron, además la violencia física que experimentaron, las agresiones de índole (…) que sufrieron; al expresar en primera persona, que su profesor de (…), y (...). Con lo que se insiste, las niñas y los niños que para el ciclo escolar (...) cursaban el (...) grado de educación primaria, en el grupo (...), aun recordaban claramente los hechos que percibieron cuando cursaron el (...) grado, con el **PROFESOR AR1**.

129. En adición al resultado de la dinámica de buzón, personal de psicología adscrito al área de Atención a Víctimas, de esta Comisión de Derechos Humanos, obtuvo la declaración directa de las niñas **VD** y **M2**, siendo ellas quienes acudieron a solicitar el apoyo psicológico de la **LICENCIADA EN PSICOLOGÍA SP1**. Por lo que hace a **M2** su declaración tiene valor probatorio como testimonial, ya que a solicitud expresa de la mamá y del papá de ésta, no es su deseo que en el presente instrumento Recomendatorio se vincule a su hija; sin embargo, resulta de trascendental importancia su ateste.

130. Así, **VD** manifestó que ella y una amiga que es sobrina de "ese **AR1**", se acercaron con una psicóloga, y le platicó que este Profesor, quien ya se había jubilado, una vez, cuando estaban en (...). Por su parte, **M2** mencionó que cuando estaba en (...), con el profe "**AR1**", a las niñas (...) y a los niños les pegaba, describiendo la forma en que presenció la violencia.

Mismo que resulta coincidente con la mayoría de las cartas obtenidas a través de la dinámica de buzón, realizada por personal del área de Atención a Víctimas de este Organismo. Respecto a la violencia física, expuso que era a través de (…). Mientras que, en relación a la violencia (…), afirmó que a todas las niñas (…). Específicamente señaló que, este profesor (…)

131. Este Organismo no soslaya que, del análisis y las conclusiones asentadas por personal de psicología, del área de Atención a Víctimas de esta Comisión, las manifestaciones que **M2** y **VD**, hacen respecto a (…) por parte del maestro fueron concretas, claras, ya que comentaron el hecho de manera breve, mencionando que solo ocurrió una vez, porque ellas evitaban acercarse al profesor, pero a otras compañeras (…). En dichas conclusiones se aseveró además que **M2** y **VD** no presentan signos y síntomas visibles, propios de (…) en su esfera psicológica (Aparición de miedos y fobias, síntomas propios de una depresión, ansiedad, sentimiento de culpa y baja autoestima, trastorno por estrés postraumático, conducta suicida y tendencia a autolesionarse); cognitivo (Déficits de atención y concentración, bajo rendimiento académico, conductas hiperactivas); relacional (Aislamiento social, reducción del tiempo de juego con otros niños, problemas de relación social), y funcional (Insomnio y aparición de pesadillas, trastornos de la conducta alimentaria, falta de control de los esfínteres). Sin que ello signifique que los eventos no hayan ocurrido, sino que las niñas, presentan en su individualidad, un grado alto de resiliencia.

132. Por otro lado, atendiendo al dictamen psicológico forense, expedido el 20 de marzo de 2020, por el **MAESTRO PP,** Perito en Psicología, que colaboró con las actividades de este Organismo, se pudo documentar que **VD**, le expuso que el **PROFESOR AR1** (…). De esa entrevista, el Perito Forense concluyó que **VD**, no presentó signos ni síntomas a agresión (…), ya que estos síntomas se encontraban en remisión. Por otro lado, se desprende que **VD**, refirió como generador de las conductas que se denunciaron fue "el profe **AR1**", luego de la entrevista con la menor el Perito en Psicología determinó que su testimonio es confiable.

133. Importante resultan las conclusiones a las que arribaron los profesionistas en psicología, respecto de que **VD**, al contar con un grado alto de resiliencia, a la fecha en que fue entrevistada, luego de más de 2 años de haber transcurrido los eventos de violencia, ya no presentaba signos y síntomas de agresión (…), sin que ello signifique que los eventos que refirió no hubiesen ocurrido, pues su testimonio es considerado confiable. Ahora bien, siguiendo las conclusiones a las que arribó el personal del área de Atención a Víctimas de esta Comisión, se entiende por resiliencia a *"la capacidad de resistencia del ser humano y se lleva a cabo mediante un proceso el cual le permite a la persona superar el trauma y adaptarse a su entorno, crecer y desarrollarse de una forma óptima."*

134. Entonces, **VD**, al ser resiliente, contó con recursos y herramientas psicológicas que le permitieron encontrar vínculos, quizá en los integrantes de su familia o de la escuela, que le favoreció en su desarrollo, crecimiento y adaptabilidad, luego del episodio de violencia (…) que vivió cuando cursaba el (...) de escolaridad primaria, así el apoyo positivo que recibió en el cual se le brindó respeto, seguridad y protección ha generado en **VD** que pueda llevar una vida lo más normal posible.

135. En ese sentido, aun y cuando a la fecha de la entrevista con el Perito Psicólogo, **VD** no presentaba signos y síntomas de agresión (…), su declaración resulta confiable y en ella se describen los hechos que le sucedieron a **VD** y a otras niñas, a las cuales no identificó, todo esto mientras cursaban el (...) de escolaridad primaria, en el grupo (...), de la escuela primaria (...), ubicada en (...), Zacatecas; asimismo, identificó plenamente a su agresor como el Profesor "**AR1**", cuyo nombre es **AR1**.

136. Aunado a lo anterior, se cuenta con la descripción de los hechos e identificación del agresor que hace la testigo **M2**, quien señaló directamente como el agresor al profe "**AR1**"; y, respecto a las circunstancias de tiempo y lugar, afirmó que (…) con lo que queda claro que **M2,** al haber sido víctima (…) por parte del **PROFESOR AR1**, se horrorizaba al ver que a sus compañeras les estaba sucediendo lo mismo. De ahí, que decidiera voltearse para no ver.

137. Corolario de lo anterior, las instituciones educativas, deben ser espacios libres de violencia, áreas en donde las niñas y los niños se sientan seguros, protegidos, respetados, por lo que los estereotipos y roles de género deben quedar fuera de sus aulas, para generar un efectivo derecho a la educación, a la igualdad y no discriminación, en donde el personal que ahí labora, ya sea, personal docente, administrativo o directivo, tienen el deber de prevenir, investigar, sancionar y erradicar la violencia, particularmente la violencia contra las mujeres, las niñas, en las escuelas. Sin embargo, en el presente caso queda debidamente acreditado que, el **PROFESOR AR1,** ejerció en contra de **VD** violencia (…), por ser niña, es decir, por su pertenencia al sexo femenino, así como por la vulnerabilidad que acarrea su edad, ya que no podía tomar decisiones por sí misma, ante las situaciones de violencia que estaba viviendo, tan es así que no fue sino hasta dos años después de ocurrido el hecho, que pudo expresar la violencia que se ejerció en su contra.

138. La violencia contra niñas y niños no tiene justificación alguna, y debe ser reprochable, como en la especie se hace, ya que frente a la interseccionalidad en que se encontraba **VD,** el **PROFESOR AR1** tenía la posición de garante de sus derechos, pero por el contrario, utilizó justamente esa jerarquía que existe entre Profesor y alumna (alumna mujer-menor de edad), para desplegar sobre su cuerpo conductas (…) que dañaron su integridad física, psíquica, moral y sexual de su educanda.

139. Entonces, ante la desigualdad de género, existían también otras formas de expresión del desequilibrio entre **VD** y su agresor, como es el grado de estudios, ya que, mientras ella cursaba el (...) de educación primaria, él era su profesor, un profesor a punto de jubilarse, por lo que la diferencia de edad entre ambos era bastante, tomando en cuenta los (…) años de ella y los más de 50[76] de él, con lo que se identifica plenamente la relación de poder existente y que, aprovechándose de esto el **PROFESOR AR1**, en su calidad de docente, falló a su deber de cuidado e hizo uso de manera intencional de ese poder para afectar (…) a la menor.

140. Tampoco se puede perder de vista que el **PROFESOR AR1**, al desempeñarse como docente de **VD,** además de gozar de esa situación de autoridad, tenía la confianza de sus estudiantes (niñas y niños), depositada en él, además de las familias e incluso de la comunidad. Sin embargo, tristemente ha quedado acreditado que, una vez más, la particular vulnerabilidad de las niñas las expone a conductas de (…) por parte de hombres mayores[77], como en este caso sucedió.

141. En este punto, no puede soslayarse que, al rendir su informe la Directora del plantel educativo (...), **PROFESORA AR2**, afirmó que a ella correspondió dirigir el plantel durante el ciclo escolar (...), en el cual, el **PROFESOR AR1** estuvo a cargo del (...) grupo (...), y añadió que este profesor mostró una conducta intachable, ya que cumplía con cada una de sus comisiones y siempre estaba dispuesto a apoyar en lo que fuera necesario, entregaba a tiempo sus planeaciones y todo aquel documento que le fuera requerido.

142. Afirmó que, durante ese ciclo escolar, realizó varias visitas al grupo en comento y observaba que siempre estaba con sus alumnos trabajando y atendiendo a sus dudas, a su informe añadió su opinión y consideró que la forma de trabajar del Profesor **AR1** mientras fue el docente del (...), grupo (...), era muy tradicionalista, pero esa era su forma de trabajo; enseguida, destacó algunas cualidades, tales como que, jamás fue acreedor a una llamada de atención, ni se le observó ninguna conducta que afectara a sus alumnos, que siempre mostró un gran compañerismo y un gran compromiso, que durante este ciclo escolar no faltó ni un solo día, siempre fue muy puntual y su desempeño como maestro fue muy bueno. Luego, confirmó que durante el siguiente ciclo escolar ((...)), el citado Profesor, realizó los trámites de jubilación.

143. En este punto resulta preocupante que las conductas que las niñas expusieron ante la **PSICÓLOGA SP1**, y que fueron corroboradas mediante las dinámicas de buzón que se obtuvieron los días 12 y 13 de noviembre de 2019, respecto de las violencias que vivieron y presenciaron en (...), por parte de su **PROFESOR AR1**, puedan pasar desapercibidas por las autoridades inmediatas como la Directora, ya que, conforme al estándar establecido en

[76] Tomando en cuenta su fecha de nacimiento, (…)
[77] Comité CEDAW, Recomendación general No. 24, Las mujeres y la salud, 1999, Doc. A/54/38/Rev.1 cap. I, párr. 12

materia de derechos humanos, se debe otorgar valor a la declaración de las mujeres víctimas de violencia.

144. Al respecto, la Corte Interamericana ha señalado, a través del Caso Fernández Ortega y otros Vs. México, estableció que, en atención a la naturaleza de la violencia contra las mujeres, no se puede esperar la existencia de pruebas gráficas o documentales y, por ello, su declaración constituye una prueba fundamental sobre los hechos que denuncian. Entonces, partiendo de la credibilidad del testimonio de las víctimas, este Organismo encuentra concatenación de estos con los testimonios recabados en las dinámicas de buzón y testimoniales directas, obtenidas a las niñas, quienes expusieron, de forma libre, sin coerción, e incluso, sin el miedo que le tenían a su agresor, pues sabían que ya no estaba en la escuela, por lo que confirmaron cada una de las conductas denunciadas, al referir que el **PROFESOR AR1**, realizaba sobre ellas (…).

145. Entonces, anteponer en favor del agresor, una serie de atributos y cualidades descritas en el informe rendido por la **PROFESORA AR2**, y dudar del testimonio de las víctimas refleja que se invisibiliza y normaliza la violencia contra las mujeres. Esto es así, pues la citada Directora, al constituirse como autoridad educativa dentro del plantel (...), le rige lo establecido en el artículo 1° de la Constitución Federal, a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, por lo que, al plantearse una cuestión de violencia de género, en donde dos niñas, (...) afirmaron (…) por su profesor cuando cursaban el (...), en el ciclo escolar (...), se traduce en un caso en que es una mujer, en este caso niñas, quienes afirmaron ser víctimas de una situación de violencia, por lo cual se está ante un caso que amerita aplicar la herramienta de perspectiva de género y, si no tenía conocimiento de los hechos aun y cuando se encontraba ejerciendo su encargo en el ciclo escolar en que éstos sucedieron, lo pertinente era expresar total credibilidad al dicho de ellas, de las víctimas, pues en estos casos se requiere una mayor y particular protección del Estado, a fin de lograr una garantía real y efectiva de sus derechos humanos.

146. Se concluye que, ante el derecho de las mujeres y niñas, a una vida libre de discriminación y de violencia, las autoridades tienen la obligación de actuar con perspectiva de género, con lo cual se pretende combatir argumentos estereotipados e indiferentes para el pleno y efectivo ejercicio del derecho a la igualdad; por tanto, se tiene el deber de actuar con la debida diligencia en casos de violencia contra las mujeres, en donde no solo se debe investigar efectivamente, sino que se deben adoptar medidas integrales con perspectiva de género para cumplir con la debida diligencia y generar políticas de prevención y prácticas para actuar eficazmente ante las denuncias, por lo que en el caso en concreto, al restarle credibilidad al dicho de **VD** y **M2**, se aleja de la posibilidad de generar un mecanismo de confianza para que, en casos similares a este, las niñas y niños sientan la confianza de encontrar un canal abierto de comunicación con sus autoridades educativas.

- Violencia física

147. La misma Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, conceptualiza la violencia física como cualquier acto u omisión intencional realizado por la persona agresora, que inflija daño o dolor en el cuerpo de la víctima, por medio de la fuerza física o algún tipo de arma, objeto o sustancia, que pueda provocar o no lesiones ya sean internas, externas, o ambas; mientras que la Recomendación General 13 "*Derecho del niño a no ser objeto de ninguna forma de violencia"*[78], sostiene que toda violencia en contra de los niños y las niñas se puede prevenir y que, la expresión "toda forma de perjuicio o abuso físico o mental", establecida en el artículo 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño, implica que no se puede concebir espacio para ningún grado de violencia legalizada contra los niños, entre las que enunció la violencia por descuido y la violencia física.

148. En ese sentido, si bien es cierto, la llamada telefónica realizada el 04 de noviembre de 2019, por la **LICENCIADA SP1**, para denunciar ante este Organismo la violencia (…) que vivieron dos niñas, alumnas de, en ese momento (...), por hechos acontecidos mientras

[78] Emitida por el Comité de los Derechos del Niño, el 18 de abril de 2011

cursaban el (...), en la escuela primaria (...), ubicada en (...), Zacatecas, también lo es que, derivado de las dinámicas de buzón, las niñas y los niños expusieron que el Profesor **AR1**, mientras fue su maestro en (...), ejercía actos de violencia física contra ellos, al referir (…).

149. Por ese motivo, este Organismo no puede soslayar que, un profesor adscrito a un grupo de niñas y niños, de (...) de nivel primaria, haya ejercido violencia de forma generalizada hacía los alumnos que tenía a su cargo y que ninguna de las autoridades escolares haya notado dichas acciones. Pues aunado al resultado de la dinámica de buzón, se obtuvo la testimonial directa de **M2**, quien afirmó que, (…), el Profesor "**AR1**", les pegaba a los niños (...).

150. Entonces, la violencia física ejercida por el **PROFESOR AR1**, en contra de sus alumnos, resulta contradictoria a su deber que, como miembro del Estado tenía de garantizarles un ambiente escolar libre de violencia, al otorgarles cuidado y protección, para que su desarrollo fuera sano e integral, pues no solo faltó a su deber de respeto y protección efectiva, sino que fue él quien materializó las formas de violencia descritas por las niñas y los niños en la dinámica de buzón y en los testimonios recabados de forma directa y confiable.

151. Con lo que queda también acreditado que el **PROFESOR AR1**, se aprovechó de las circunstancias en las que se encontraba frente a su grupo, pues por un lado, se ostentaba como su maestro, por lo que ejercía funciones de autoridad; y por otro, la edad de sus alumnas y alumnos que, al pertenecer al (...) de escolaridad primaria, oscila en los (…) años, lo cual los hacía especialmente vulnerables, al no poder tomar decisiones respecto de la situación que estaban viviendo, de ahí que detentó en su contra (…), causando de forma intencional, daño a los niños, con lo cual menoscabó su derecho a la dignidad humana, en lugar de cuidarles y protegerles.

152. Así las cosas, era obligación del Profesor, protegerles contra toda forma de violencia, maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso, entre otras, y abstenerse de cualquier atentado contra su integridad física, psicológica o actos que menoscabaran su desarrollo integral; sin embargo, a través de las agresiones físicas, consistentes en (…), se evidencia que erró en su deber de cuidado al ejercer un poder o autoridad mal entendida en su proceso educativo, afectando el bienestar de sus educandos.

153. Finalmente, este Organismo no puede dejar de observar y pronunciarse respecto a que en la escuela primaria (...), ubicada en (...), Zacatecas, se carece de mecanismos confiables para que niñas y niños, puedan expresar situaciones por las que estén pasando o asuntos que les estén afectando al interior de su escuela, esto se considera así, pues no fue sino hasta que transcurrieron 2 años de los sucesos vividos en el ciclo escolar (...), mientras las niñas y niños cursaban el (...), en el grupo (...), cuando, a la llegada de la **PSICÓLOGA SP1**, **VD** y **M2**, se acercaron a ella a exponerle los hechos de violencia que ejerció en su contra el **PROFESOR AR1**. Con lo cual se generó la investigación correspondiente y se llegó a la conclusión de que el grupo, en general, era violentado por el referido docente.

154. Corolario de lo anterior, se encuentra debidamente documentado que, en el ciclo escolar (...), el entonces grupo de (...) de la escuela primaria (...), de (...), Zacatecas, sufrió violencia a tribuida al **PROFESOR AR1**, por lo que hace a las niñas, en el caso particular de **VD** y **M2**, (…) y, por lo que hace a los niños, violencia física (…).

155. De conformidad con los artículos 1o., 3o., párrafos primero, segundo, tercero, fracción II, inciso c) y 4o., párrafos cuarto, octavo, noveno y décimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7o., fracciones VI y XVI, 8o., fracción III y 30 de la Ley General de Educación; 3, puntos A y E, de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; 5 de la Ley General de Víctimas, las niñas y los niños, así como las y los adolescentes, tienen derecho a una educación libre de violencia en el centro escolar, como expresión o resultado del derecho a la educación, a la salud, al respeto a su dignidad humana y al principio del interés superior de la niñez.

156. Este derecho implica que en los centros escolares públicos o privados no se ejerza en contra de niñas, niños y adolescentes violencia física, sexual, psicoemocional o verbal, ya sea

directa o indirectamente, o a través de las tecnologías de la información y comunicación, generada por otros alumnos, docentes o personal directivo.

157. Por tanto, además del reproche por violencia (…) al docente **AR1**, quien causó baja por jubilación el (...)[79], y por tal razón dejó de formar parte de la plantilla laboral de la Secretaría de Educación del Estado, le resulta un reproche a la Directora del plantel educativo (...), ubicada en el municipio de (...), Zacatecas, Profesora **AR2**, por la invisibilización de las violencias que niñas y niños vivieron durante el ciclo escolar (...).

VII. CONCLUSIONES DEL CASO.

1. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, reprocha la vulneración del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, en relación con el derecho de niñas, niños y adolescentes a que se proteja su integridad personal y sexual, cometida por parte del **PROFESOR AR1**, quien fungió por el ciclo escolar (...) como Docente del (...), grupo (...), de la escuela primaria (...), ubicada en (...), Zacatecas, en contra de sus alumnas, particularmente de **VD** y **M2**, al realizar sobre ellas (...). Asimismo, sobre el resto del alumnado ejercía violencia en contra de su integridad física, a través de (…). Conductas con las que incumplió con el deber que tenía de salvaguardar la integridad personal, en su modalidad de integridad física y sexual de niñas y niños que tenía bajo su responsabilidad y cuidado.

2. De igual manera, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, reprueba la vulneración del derecho de niñas respecto de su integridad personal, en relación con su derecho a no ser objeto de (…), al haberse acreditado fehacientemente que, el **PROFESOR AR1**, aprovechó la relación jerárquica que tenía de docente-alumnas para realizar (...) a **VD** y **M2**, (…), conducta por demás reprobable, por el daño en su salud física y mental, la cual puede dejar secuelas si no se atiende de una manera adecuada. Esto se considera así, toda vez que el Profesor **AR1**, en su posición de garante, atentó contra el interés superior de las niñas y los niños, y con ello dejó de cumplir con su obligación de proteger y respetar los derechos humanos niñas y niños, alejándose de su deber de proveer un ambiente escolar libre de violencia.

3. En adición, este Organismo emite un reproche a la **PROFESORA AR2**, Directora de la escuela primaria (...), ubicada en el municipio de (...), Zacatecas, al restarles credibilidad a las manifestaciones de violencia denunciadas por las niñas y ejercidas por el **PROFESOR AR1**, con lo cual se invisibiliza y normaliza la violencia de género, ya que ante situaciones de violencia contra las mujeres, atender a su testimonio es elemental para la aplicación de la perspectiva de género, la cual obliga a todas las autoridades en el ámbito de sus respectivas obligaciones.

VIII. CALIDAD DE VÍCTIMA:

1. La Corte Interamericana ha definido qué se entiende por “víctima” en general y qué se entiende por “víctima” *stricto sensu* dentro de un proceso contencioso.

2. La noción de “víctima” bajo derecho internacional refiere a la parte lesionada. De conformidad con reglas generales de la Responsabilidad Internacional de los Estados, la parte lesionada es aquella “cuyo derecho individual ha sido denegado o dañado por el acto ilegal internacional o que ha sido de otra manera particularmente afectado por dicho acto”. En el área de la protección internacional de derechos humanos, la parte lesionada es el individuo cuyos derechos han sido violados, es decir la parte cuyos derechos han sido conculcados generándosele un daño. A menudo también se le refiere como la “parte agraviada”. El Reglamento de la Corte Interamericana define el término “víctima” de la siguiente manera:

[79] Así se desprende del informe rendido en vía de colaboración el 18 de febrero de 2020, por la M.A.G. **SPSEDUZAC1**, Subsecretaria Administrativa de la Secretaría de Educación del Estado.

"significa la persona cuyos derechos han sido violados de acuerdo a la sentencia proferida por la Corte". Es decir, "víctima" es aquella cuyos derechos ya han sido determinados por la Corte habiendo establecido violaciones en su detrimento.

3. Luego, la jurisprudencia de la Corte ha expandido *rationae personae*[80] el reconocimiento de la condición de "víctima" a personas que en su jurisprudencia inicial no eran consideradas como tales. Por ejemplo, en el caso Villagrán Morales y Otros la Corte reconoció la condición de víctimas con base a derecho propio, de los familiares de los menores asesinados. La Corte reconoció en ese sentido que los familiares de dichos menores torturados y asesinados también habían sufrido en sí mismas violaciones del artículo 5 de la Convención. En el caso Villagrán Morales y Otros, la Corte Interamericana falló de la siguiente manera: "La Comisión señaló, en sus alegatos finales escritos, que las circunstancias de la muerte de las víctimas, así como la falta de actuación del Estado, habían provocado en los familiares de las mismas "angustias y también considerable temor"[81]. "La Corte debe destacar entre las conductas de los agentes estatales que intervinieron en los hechos del caso y que produjeron un impacto sobre sus familiares, la correspondiente al tratamiento que se dio a los cuerpos de los jóvenes cuyos cadáveres aparecieron en los Bosques de San Nicolás, […]. Estas personas no sólo fueron víctimas de la violencia extrema correspondiente a su eliminación física, sino que, además, sus cuerpos fueron abandonados en un paraje deshabitado, quedaron expuestos a las inclemencias del tiempo y a la acción de los animales y hubieran podido permanecer así durante varios días, si no hubieran sido encontrados fortuitamente. En el presente caso, es evidente que el tratamiento que se dio a los restos de las víctimas, que eran sagrados para sus deudos, y en particular, para sus madres, constituyó para éstas un trato cruel e inhumano."[82]

4. En el caso Bámaca Velásquez[83], la noción ampliada de *rationae persone* fue aplicada a la viuda del desaparecido. En dicha decisión, el juez Cançado Trindade señaló con referencia a la expansión de la noción de "víctima" lo siguiente: "…Así, la Corte Interamericana ha establecido correctamente que, en circunstancias como las del presente caso Bámaca Velásquez, las víctimas son tanto la persona desaparecida como sus familiares inmediatos."[84]

5. En el marco legal nacional, la Ley General de Víctimas conceptualiza en su artículo 4, a las víctimas directas e indirectas, entre otras, de la siguiente manera: "…víctimas directas aquellas personas físicas que hayan sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional, o en general cualquiera puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte. Son víctimas indirectas los familiares o aquellas personas físicas a cargo de la víctima directa que tengan una relación inmediata con ella."

6. En el estado de Zacatecas, la Ley de Atención a Víctimas establece en el ordinal 4°, párrafos segundo y tercero: "Son víctimas indirectas los familiares o aquellas personas físicas a cargo de la víctima directa que tengan una relación inmediata con ella. Para este efecto se consideran víctimas indirectas, entre otros, los siguientes: I. El cónyuge, la concubina o el concubinario; II. Las hijas e hijos de la Víctima; III. Los Padres de la Víctima, y IV. Los dependientes económicos de la Víctima."

7. En el caso particular, aun y cuando existe el testimonio de **VD** y **M2** de haber sufrido (…) mientras cursaban su (...) de escolaridad primaria, en el grupo (...), en el ciclo escolar (...), a manos de quien tenía la obligación y la posición de garante, de protegerlas. Este Organismo es respetuoso de la decisión tomada por la madre y el padre de **M2** en el sentido de que su hija no se encuentre vinculada en el presente instrumento recomendatorio, es por ello que, quien adquiere la calidad de víctima directa, por haberse acreditado la vulneración a sus derechos humanos es la niña **VD.**

---

[80] Por razón de la persona
[81] Villagrán Morales et al case, Series C: No 63., Sentencia del 19 de noviembre de1999, op. Cid. párr. 171.
[82] Villagrán Morales et al case, Series C: No 63., Sentencia del 19 de noviembre de 1999, op. Cid., párr. 174.
[83] CtIADH, Caso Bámaca Velásquez, Series C No 70. Sentencia sobre Fondo, Sentencia de 25 de noviembre de 2000.
[84] Ídem, Párrafo 38

8. Por lo que de acuerdo con el artículo 4° de la Ley General de Víctimas, así como del numeral 4°, de la Ley de Atención a Víctimas del Estado de Zacatecas, adquieren la calidad de víctima indirecta **VI**, madre de **VD**, lo que propicia que sean susceptible de un impacto en su esfera psicosocial, con motivo de las posibles alteraciones en su entorno y en su vida familiar, generadas a partir de los hechos analizados en la presente Recomendación, por lo que deberán ser considerados para efectos de la determinación de la reparación integral del daño, así como la inscripción en el Registro Estatal de Víctimas.

IX. REPARACIONES.

1. **La obligación de reparar en el ordenamiento jurídico mexicano.** Por lo que hace al Derecho interno, el artículo 1º Constitucional establece en su párrafo tercero que "Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley".

2. Así, en un respeto irrestricto del Estado de Derecho, las personas gozarán de la garantía de que en caso de ser objeto de violación a sus derechos humanos, podrán reclamar que el o los responsables de dicha vulneración sean sancionados, pues el Estado tiene la posición de garante de sus derechos y por lo tanto; según lo ha dispuesto la Suprema Corte de Justicia de la Nación, "Las víctimas de violación a los derechos humanos o sus familiares, tienen derecho a la reparación adecuada del daño sufrido. Lo cual debe concretarse a través de medidas individuales tendientes a restituir, indemnizar y rehabilitar a la víctima, así como de medidas de satisfacción de alcance general y garantías de no repetición, mediante los procedimientos previstos legalmente para esos efectos, lo cual no es una concesión graciosa, sino el cumplimiento de una obligación jurídica. Lo anterior deriva tanto del régimen previsto constitucionalmente como de los instrumentos internacionales ratificados por México y de los criterios de organismos internacionales, los cuales se manifiestan claramente en el sentido de que es un derecho efectivo de las personas agraviadas a nivel fundamental obtener una reparación proporcional a la gravedad de las violaciones y al daño sufrido"[85].

3. El deber de reparación por violaciones a los derechos humanos, a nivel internacional lo encontramos dispuesto tanto en el sistema universal como regional de protección a los derechos humanos. En el ámbito universal, se encuentra previsto en los "*Principios y directrices básicos sobre el derecho a las víctimas de violaciones manifiestas a las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves al derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones"*, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 2005, donde se dispone que las violaciones de derechos humanos deben contemplar, de forma apropiada y proporcional a la gravedad de ésta, una reparación plena y efectiva en las formas siguientes: indemnización, restitución, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, lo cual a su vez es también contemplado por la Ley General de Víctimas, en sus artículos 1, último párrafo, 7, fracción I y II, y particularmente en el texto legal del artículo 26, que establece que *"Las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera oportuna, plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva por el daño que han sufrido como consecuencia del delito o hecho victimizante que las ha afectado o de las violaciones de derechos humanos que han sufrido, comprendiendo medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y medidas de no repetición"*, además por lo previsto en el artículo 27 del mismo ordenamiento legal. Por ello, resulta particularmente importante la ejecución de las medidas de reparación por parte del Estado dirigidas a la no repetición en Zacatecas de hechos similares a los ocurridos en el presente caso.

4. En el sistema regional, la Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 63.1 establece que:

---

[85]Tesis P/LXII/2010, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena Época, t XXXIII, enero de 2011, pág. 28

> "*Cuando decida que hubo violación a un derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá, asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que se ha configurado la violación a estos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada".*

5. Por su parte, La CrIDH, ha establecido que *"Las reparaciones, como el término lo indica, consisten en las medidas que tienden a hacer desaparecer los efectos de las violaciones cometidas. Su naturaleza y su monto dependen del daño ocasionado en los planos tanto material como inmaterial"*[86].

6. Este doble alcance de la norma reparatoria, ha incidido cada vez con mayor frecuencia en el desarrollo de la jurisprudencia de la CrIDH, dando lugar a una arquitectura reparatoria que tendrá como objetivo, no sólo borrar las huellas que en la víctima produjo el actuar del Estado, sino también evitar que ese tipo de hechos se vuelvan a repetir.[87]

7. Por lo que hace a este derecho, el artículo 51 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, dispone que, al acreditarse una violación a los derechos humanos atribuible a un servidor público estatal, la Resolución formulada al respecto debe incluir las medidas que procedan para lograr la efectiva restitución de las personas afectadas en sus derechos.

Modalidades de la reparación del daño. La reparación del daño comprende diversas modalidades en las que se puede materializar:

A) De la indemnización.

1. La indemnización ha sido reconocida como una medida que tiende a compensar a las víctimas por afectaciones materiales sufridas con motivo de la falta que ha cometido el Estado en su perjuicio, entre ellos, el daño emergente, el lucro cesante y el daño moral sufrido por la agraviada[88]; lo que no puede implicar ni un empobrecimiento ni un enriquecimiento para la víctima o sus sucesores[89].

2. La indemnización debe concederse de forma apropiada y proporcional a la gravedad de la violación y a las circunstancias de cada caso, por todos los perjuicios económicamente evaluables que sean consecuencia de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos, tales como los siguientes: a) el daño físico o mental; b) la pérdida de oportunidades, en particular las de empleo, educación y prestaciones sociales; c) los daños materiales y la pérdida de ingresos, incluida el lucro cesante; d) los perjuicios morales; y e) los gastos de asistencia jurídica o de expertos, medicamentos y servicios médicos y servicios psicológicos y sociales[90].

3. En la presente recomendación, se considera necesario realizar una evaluación de impacto psicosocial, para determinar los daños materiales e inmateriales de víctima directa e indirecta, derivadas de las afectaciones psicoemocionales que presentan como consecuencia de la actuación de las autoridades responsables. Asimismo, es indispensable que se valoren los gastos realizados por la familia para la atención médica y psicológica de la niña **VD**.

4. El concepto de indemnización deberá ser tomado en consideración por las autoridades responsables en favor de **VD**, persona de quien se tiene por demostrada afectación concreta, en los términos expuestos en el presente Instrumento Recomendatorio. Para determinar el

---

[86]Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Acevedo Jaramillo y otros Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de febrero de 2006. Serie C No. 144, Párr. 175.
[87] Rousset Siri, Andrés Javier (2011): *El Concepto de reparación integral en la Jurisprudencia Interamericana de Derechos humanos.* Revista Internacional de Derechos Humanos / ISSN 2250-5210 / 2011 Año I – N1 59 www.revistaidh.org
[88]Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Velázquez Rodríguez vs Honduras, Reparaciones y Costas, Sentencia 21 de junio de 1989, Serie C, No. 7, párr. 38.
[89]Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Tinoco Estrada y otros vs Bolivia, Fondo, reparación y costas. Sentencia 27 de noviembre de 2008 C, No. 211.
[90] ONU, A/RES/60/147, op. Cit., nota 370, párrf.20.

monto, considérense los hechos del caso y los daños acreditados, debiendo ser proporcional a la gravedad de la violación y a las circunstancias, así como acorde a la evaluación económica de los perjuicios evaluables, como consecuencia de las violaciones acreditadas.

5. Asimismo, el concepto de indemnización deberá ser tomado en consideración por las autoridades responsables en favor de **VI**, en su calidad de madre de **VD**, como víctima indirecta, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 4 fracción I y II, de la Ley de Atención a Víctimas del Estado de Zacatecas.

B) De la Rehabilitación.

1. La rehabilitación debe incluir la atención médica y psicológica, así como los servicios jurídicos y sociales[91], que resulten necesarios, en el caso que nos ocupa, la rehabilitación se refiere a la adquisición de las nuevas competencias que requieran las nuevas circunstancias en que se encuentren las víctimas como consecuencia de la lesión de la que hubieran sido objeto, siempre y cuando se haya materializado esta situación. En el caso que nos ocupa, la rehabilitación de las víctimas debe centrarse en el restablecimiento, en toda la medida de lo posible de su salud física y psicológica en caso de que ello resulte necesario, para lo cual deberá evaluarse la condición física y psicológica en cuanto a la afectación sufrida por **VD**, en su calidad de víctima directa y de **VI** en su calidad de madre de **VD**.

2. La evaluación de posibles afectaciones debe incluir la atención social orientada a garantizar el pleno ejercicio y restablecimiento de los derechos de las víctimas, quienes, en este caso, al ser menores de edad, deberán ser tratadas con un enfoque especializado. La atención deberá darse a través de las personas adultas que estén a su cargo, quienes a su vez también tendrán que recibir asesoría con el propósito de restablecer el cauce del proyecto de vida de la menor.

3. Las medidas de atención deberán ser brindadas a las víctimas de forma gratuita e inmediata, incluyendo la provisión de medicamentos y los gastos directamente relacionados y que sea estrictamente necesarios[92] atendiendo a las especificidades de género y edad de las víctimas, previo consentimiento informado, y en los centros más cercanos a sus lugares de residencia por el tiempo que sea necesario. En este sentido, según las violaciones a derechos humanos acreditadas en el presente instrumento, **VD** y **VI** deberán acceder a medidas de rehabilitación, particularmente al tratamiento psicológico y/o psiquiátrico que su estado de salud amerite, por el tiempo que sea necesario hasta su total restablecimiento. Asimismo, debe garantizarse que dichos tratamientos sean efectivamente especializados y que consideren las características de edad y género de las víctimas, y eviten condiciones revictimizantes.

C) De la Satisfacción.

1. Respecto a este concepto, de conformidad con lo establecido por los Principios sobre el derecho a obtener reparaciones, ésta debe incluir, cuando sea el caso, la totalidad o parte de las medidas siguientes: a) medidas eficaces para conseguir que no se continúe con las violaciones; b) la verificación de los hechos y la revelación pública y completa de la verdad; c) una declaración oficial o decisión oficial que restablezca la dignidad, la reputación y los derechos de la víctima; d) una disculpa pública; y e) la aplicación de sanciones judiciales o administrativas a los responsables de las violaciones[93].

2. Por lo que hace al caso que nos ocupa, las víctimas (directa e indirecta) tienen derecho a que se haga todo lo necesario para conocer la verdad de lo sucedido a través de una investigación efectiva, el procesamiento de los responsables de las acciones que pudieron colocarles en una situación de riesgo para que pueda procederse a la imposición de las

---

[91] ONU, Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas a las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves al derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, A/RES/60/147, 21 de marzo de 2006, párr.21

[92] Corte IDH, Caso Rosendo Cantú y otra Vs. México, Op.cit., párr. 252.

[93]ONU, Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas a las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves al derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, A/RES/60/147, 21 de marzo de 2006, párr.22

sanciones pertinentes. Las medidas de satisfacción se encuentran dirigidas a reparar el daño inmaterial, incluyendo los sufrimientos y las aflicciones causados por las violaciones a los derechos humanos, y cualquier alteración, de carácter no pecuniario, en las condiciones de existencia de las víctimas[94].

3. Es necesario que la Secretaría de Educación del Estado implemente mecanismos adecuados para que, una vez que por cualquier medio sea notificada de casos de abuso sexual infantil cometido en contra de niñas, niños y adolescentes, se actúe de inmediato para evitar que este tipo de conductas las y los coloquen en riesgo de ser afectados, atendiendo siempre el interés superior del menor; asimismo, se deberá iniciar y concluir dentro de los términos legales los procedimientos administrativos de investigación, debiendo materializar la posible sanción a que se hagan acreedores profesores o profesoras que incurran en estos hechos, evitando que solo se les imponga, como sanción administrativa, el cambio de centro trabajo.

D) De las Garantía de no repetición.

1. Las garantías de no repetición son aquellas que se adaptan con el fin de evitar que las víctimas vuelvan a hacer objeto de violaciones a sus derechos humanos y para contribuir a prevenir o evitar la repetición de actos de su misma naturaleza.

2. En este sentido, la Secretaría de Educación del Estado de Zacatecas debe reforzar acciones que prevengan y detengan las expresiones de violencia de abuso sexual infantil, maltrato y violencia escolar en las escuelas de educación básica en aras de salvaguardar el interés superior de las niñas, niños y adolescentes que acuden a los centros educativos.

La promoción del contenido de los Protocolos del estado de Zacatecas para la Prevención, Detección y Actuación en casos de abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato en escuelas de educación básica debe ser permanente al mismo tiempo en que sus avances se evalúan de forma periódica con el propósito de generar estrategias actualizadas que impacten de manera positiva al ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes en su integralidad.

3. La Secretaría de Educación del Estado de Zacatecas debe garantizar la implementación de medidas con enfoque diferenciado y transformador, que tengan un efecto no solo restitutivo sino también correctivo, encaminadas a evitar la tolerancia de acciones que pongan en riesgo la integridad física y psicológica de las niñas, niños y adolescentes que acuden a sus escuelas. Para ello, el trabajo de esa Secretaría debe ser coordinado para que la comunicación fluya de manera veraz y oportuna en caso de detectar factores de riesgo en los centros escolares.

4. Este Organismo estima necesaria la capacitación a los servidores públicos del Sistema Estatal Educativo Estatal, a través de programas y cursos permanentes de capacitación eficiente, en temas de derechos humanos. Particularmente, se les deberá capacitar en la Convención sobre los Derechos del Niño; así como en los estándares del interés superior del menor, derivados de la Opinión Consultiva OC-17/02, de la Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como de los parámetros establecidos a través de la Recomendación General No. 13, relativa al derecho del niño a no ser objeto de ninguna forma de violencia; en las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley de los Derechos de Niñas, niños y Adolescentes del Estado de Zacatecas, la Ley General de Educación, la Ley de Educación del Estado de Zacatecas, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y su homóloga estatal, particularmente en aquellas disposiciones relativas a la responsabilidad de los docentes relacionadas con la vulneración de los derechos de niñas y niños en lo referente al abuso sexual infantil, así como a la violencia física y psicológica cometidos por docentes en agravio de niñas y niños. Dichos cursos deberán impartirse al personal docente de la escuela primaria (...), ubicada en (...), Zacatecas, así como a la **PROFESORA AR2**, Directora de esa

[94] Corte IDH, Caso González y otras (Campo Algodonero) vs. México, Op. Cit., párr.579.

escuela, puesto que la capacitación como medida de reparación resulta relevante, debido a que previene conductas infractoras de los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes.

X. RECOMENDACIONES.

PRIMERA. En un plazo máximo de un mes, posterior a la notificación de esta Recomendación, se inscriba en el Registro Estatal de Víctimas a **VD** en calidad de víctima directa de violaciones a derechos humanos, así como a **VI** como víctima indirecta. Asimismo, dentro del plazo máximo de un año, contado a partir de la notificación de la presente Recomendación, se garantice su acceso oportuno al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, previsto en la Ley de Atención a Víctimas del Estado de Zacatecas, a efecto de que se realice la indemnización correspondiente; debiendo remitir a este Organismo protector de Derechos Humanos, las constancias con que acredite su cumplimiento.

SEGUNDA. Dentro del plazo máximo de un mes, contado a partir de la aceptación de esta Recomendación, se brinde la atención psicológica que requiera para la prosecución de la remisión parcial en la que se encuentra **VD** relacionada con el proceso y los sucesos ocurridos con motivo de los hechos objeto de estudio de la presente Recomendación y se dé continuidad con dicho tratamiento hasta el total restablecimiento de su salud psicológica.

TERCERA. Dentro de un plazo máximo de tres meses, contados a partir de la aceptación de la presente Recomendación, la Secretaría de Educación del Estado de Zacatecas, distribuya y capacite al personal, en el que deberá estar integrada la **PROFESORA AR2**, en el contenido de los Protocolos del Estado de Zacatecas para la Prevención, Detección y Actuación en casos de abuso infantil, acoso escolar y maltrato en las escuelas de educación básica publicado en junio de 2017, para que en lo sucesivo se conduzcan en su actuar laboral con apego a la legalidad y respeto, protección, promoción y garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes, prevaleciendo siempre el interés superior de la niñez, debiendo enviar a este Organismo, las respectivas constancias de cumplimiento.

CUARTA. Dentro del plazo máximo de seis meses, contados a partir de la aceptación de la presente Recomendación, se establezca, socialice y difunda un sistema de Buzón de Quejas en el que niñas, niños, madres, padres, tutores/as puedan expresar sus inconformidades con el trabajo de personal docente y directivo en escuelas primarias del estado de Zacatecas, con relación a probables hechos de abuso sexual infantil, maltrato y acoso escolar, debiendo enviar a este Organismo, las respectivas constancias de cumplimiento.

QUINTA. Dentro del plazo máximo de seis meses, contados a partir de la aceptación de la presente Recomendación la Secretaría de Educación del Estado genere un Sistema de Registro de faltas administrativas y/o inconformidades de padres, madres, tutores o tutoras y demás integrantes de la comunidad escolar en contra de personal docente y directivo de escuelas primarias del estado de Zacatecas por hechos de abuso sexual infantil y/o violencia contra estudiantes, a efecto de llevar a cabo la aplicación de procedimientos que garanticen la atención, investigación, sanción, y en su caso, reparación del daño causado a las víctimas.

SEXTA. Dentro del plazo máximo de seis meses, contados a partir de la aceptación de la presente Recomendación, la Secretaría de Educación del Estado genere un Padrón de Registro de personas docentes y directivos con antecedentes de conducta de índole sexual en agravio de niñas y niños, a efecto de que se les inicie el procedimiento de responsabilidad administrativa respectivo y, en su caso, se imponga la sanción correspondiente, evitando que éstas personas vuelvan a desempeñarse frente a grupos escolares de niñas y niños, así como el cambio de adscripción o recontratación para impedir que vuelvan a tener contacto con estudiantes menores de edad, porque ello puede poner en riesgo su integridad personal y su dignidad humana.

SÉPTIMA. Dentro de un plazo máximo de seis meses, contados a partir de aceptación de esta Recomendación, se capacite al personal de los planteles educativos, de manera específica de la escuela primaria (...), ubicada en el municipio de (...), Zacatecas, en los

temas siguientes: Convención sobre los Derechos del Niño; así como en los estándares del interés superior del menor, derivados de la Opinión Consultiva OC-17/02, de la Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como de los parámetros establecidos a través de la Recomendación General No. 13, relativa al derecho del niño a no ser objeto de ninguna forma de violencia; en las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley de los Derechos de Niñas, niños y Adolescentes del Estado de Zacatecas, la Ley General de Educación, la Ley de Educación del Estado de Zacatecas, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y su homóloga estatal, y demás relativos a la protección y respeto a los Derechos de la niñez en relación a su derecho a que se proteja su integridad física y psicológica personal, así como su derecho a no ser objeto de abuso sexual, para que en lo sucesivo se conduzcan con apego y respeto a las disposiciones aplicables, así como en los Principios del trato a Niñas, Niños y Adolescentes, especialmente en casos que impliquen la afectación a sus derechos humanos.

OCTAVA. En un plazo máximo de seis meses, contado a partir de la aceptación de la presente recomendación, la Secretaría de Educación del Estado, deberá implementar un Programa de prevención de la violencia sexual, en los centros educativos, en el que participen padres y madres de familia, alumnas y alumnos, además del personal docente, directivo y administrativo, ya que son éstos últimos los responsables del cuidado de las niñas y los niños, y en quienes recae el deber de salvaguardar su integridad personal, en sus vertientes física, psicológica y sexual, porque se encuentran en contacto permanente con las niñas y niños. Lo anterior, a fin de prevenir que los casos de violencia sexual en centros escolares sigan ocurriendo.

NOVENA. Se ordena dar vista con copia certificada de la presente resolución al **DOCTOR FRANCISCO JOSÉ MURILLO RUISECO**, Fiscal General de Justicia del Estado de Zacatecas, a efecto de que gire instrucciones para que se dé inicio a la carpeta de investigación correspondiente, la cual deberá ser integrada con base en los elementos normativos y jurisprudenciales de la perspectiva de género y perspectiva de la niñez, dándole celeridad y, en su momento procesal oportuno, se resuelva lo que en derecho proceda.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 53, párrafo segundo de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, se hace del conocimiento de las autoridades a la que va dirigida esta Recomendación, que dispone de un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente en que ésta se les notifique, para que manifiesten si la aceptan o no, en el entendido de que, de no aceptarla, su respuesta se hará del conocimiento de la opinión pública. En caso de que la acepte, se le notifica que dispone de un plazo de 15 días, contados a partir del vencimiento del término del que disponía para responder sobre la aceptación, a fin de enviar las pruebas de su cumplimiento.

Por último, hágasele saber a la parte quejosa que, de conformidad con el artículo 61 de la Ley de este Organismo, dispone de 30 días naturales, computados a partir de la fecha de notificación del presente documento, para que en caso de que exista inconformidad con la misma, interponga el recurso de impugnación correspondiente ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Así lo determina y firma

DRA. EN D. MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOS
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE ZACATECAS

Expediente: CDHEZ/016/2020.

Persona quejosa: Oficiosa.

Personas agraviadas: VD†, VI1, VI2, VI3, VI4 y **VI5.**

Autoridad Responsable: Elementos de la Policía Estatal Preventiva.

Derechos humanos vulnerados:
I. Derecho a la vida, en su modalidad a no ser privado de la misma, en relación con el uso inadecuado de la fuerza pública, que motiva una ejecución arbitraria.

Zacatecas, Zac., a 28 de julio de 2021, una vez concluida la investigación de los hechos que motivaron el expediente de queja CDHEZ/016/2020, y analizado el proyecto presentado por la Tercera Visitaduría, la suscrita aprobé, de conformidad con los artículos 4, 8 fracción VIII, 17 fracción V, 37, 51, 53 y 56 de la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, en relación con lo dispuesto por los numerales 27, fracción VIII, 40, 161, fracción X, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 y 175 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, la **Recomendación No. 38/2021** que se dirige a la autoridad siguiente:

ING. ARTURO LÓPEZ BAZÁN, Secretario de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas.

I. DE LA CONFIDENCIALIDAD

1. De conformidad con los artículos 6°, apartado A, fracción II y 16, apartado A, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 23 y 85 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, los datos personales de los peticionarios y los agraviados que así lo soliciten, relacionadas con esta resolución, permanecerán confidenciales, ya que éstos no son públicos.

2. Asimismo, en términos de lo dispuesto por los artículos 4º, párrafo noveno, 6º, inciso A, fracción II y 16, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 32 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del estado de Zacatecas, los numerales 76, 77 y 79 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y los artículos 23 y 85 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, los datos personales de los menores, relacionados con esta resolución, permanecerán confidenciales, ya que sus datos personales, así como aquellos relativos a su vida privada y familiar, no tienen el carácter de públicos.

II. RELATORÍA DE LOS HECHOS Y OBJETO DE LA CONTROVERSIA.

1. El 12 de enero de 2020, los diarios de circulación estatal el diario “NTR”, “El Sol de Zacatecas”, y “Ecodiario”, dieron a conocer la muerte de una persona que se desempeñaba como elemento de la Policía Estatal Preventiva. Hecho que acaeció en las instalaciones de la propia Policía Estatal Preventiva, al parecer producto de un accidente con el arma de fuego de otro efectivo.

El 13 de enero de 2020, el Departamento de Orientación y Quejas de este Organismo, inició queja de manera oficiosa por el deceso de **VD†**, al interior de su centro de trabajo, concretamente de las instalaciones de la Policía Estatal Preventiva, acontecido el 11 de

enero de 2020. Lo anterior, con fundamento en el artículo 30, párrafo tercero de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, así como en el numeral 63, fracción V, del Reglamento que rige el actuar de este Organismo.

Por razón de turno, el 14 de enero de 2020, se remitió antecedentes de hechos, bajo el número de expediente citado al rubro, a efecto de formular el acuerdo de calificación de ésta, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 123 y 124 del Reglamento de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas.

El 14 de enero de 2020, los hechos se calificaron como presunta violación al derecho a la vida, en su modalidad a no ser privado de la misma, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 123 y 124 fracción I, del Reglamento de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas.

2. Los hechos materia de la queja consistieron en lo siguiente:
Quien respondiera al nombre de **VD**†, era elemento de la Policía Estatal Preventiva. El día 11 de enero de 2020, arribó a su trabajo, realizó las labores iniciales, tales como participar en el ensayo de la banda de guerra, y esperar que se le asignara unidad radio patrulla para salir a campo; momento en el cual, pierde la vida, al recibir impactos de arma de fuego provenientes del arma de cargo de su compañero **C. JORGE EDUARDO AVITIA VILLEGAS**.

3. Las autoridades involucradas rindieron sus respectivos informes:

a) El **INSPECTOR GENERAL ISAÍAS HERNÁNDEZ LANDEROS,** anteriormente Director de la Policía Estatal Preventiva, el 24 de enero de 2020.
b) La **LIC. MARÍA ENGRACIA GONZÁLEZ NAVA**, agente del Ministerio Público, adscrito a la Unidad Especializada en la Investigación de Homicidios Dolosos II, de la Capital, el 19 de febrero de 2020.
c) El **INSPECTOR GENERAL ISAÍAS HERNÁNDEZ LANDEROS,** otrora Director de la Policía Estatal Preventiva, el 19 de marzo de 2020.
d) El **LIC.** e **ING. JOSÉ ANTONIO ALVARADO CHÁVEZ**, Coordinador de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas, el 04 de mayo de 2020.
e) El **I.S.C. GUSTAVO ALBERTO FERNÁNDEZ MEDINA,** Director del C5, Zacatecas, el 27 de mayo de 2020.
f) La **LIC. YESSICA GRISEL HUERTA RANGEL**, agente del Ministerio Público, adscrito a la Unidad Especializada en la Investigación de Homicidios Dolosos II, de la Capital; el 21 de agosto de 2020.
g) El **LIC.** e **ING. JOSÉ ANTONIO ALVARADO CHÁVEZ**, Coordinador de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas, el 05 de octubre de 2020.
h) El **LIC.** e **ING. JOSÉ ANTONIO ALVARADO CHÁVEZ**, Coordinador de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas, el 22 de octubre de 2020.
i) La **LIC. YESSICA GRISEL HUERTA RANGEL**, agente del Ministerio Público, adscrito a la Unidad Especializada en la Investigación de Homicidios Dolosos II, de la Capital, el 04 de noviembre de 2020.
j) El **INSPECTOR GENERAL ISAÍAS HERNÁNDEZ LANDEROS,** otrora Director de la Policía Estatal Preventiva, el 13 de enero de 2021.
k) El **LIC. RICARDO DANIEL MUÑOZ CERRILLO**, agente del Ministerio Público, adscrito a la Unidad Especializada en la Investigación de Homicidios Dolosos II, de la Capital, el 10 de febrero de 2021.

III. COMPETENCIA.

1. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas es competente, en términos de los artículos 1º, 4º, 6º, 8º fracción VII, inciso A) y 31 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, en relación con los numerales 15, 22 y 23 de su Reglamento Interno, en razón de que la queja se promueve en contra de funcionarios de la

administración pública estatal, como son los elementos de la Policía Estatal Preventiva de Zacatecas.

2. De conformidad con los artículos 123 y 124 del Reglamento Interior de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, este Organismo advirtió que de los hechos se puede presumir violación de los derechos humanos de **VD, VI1, VI2, VI3, VI4** y **VI5**, así como la responsabilidad de los servidores públicos señalados.

3. Esta Comisión presumió la violación de los siguientes derechos:
a) Derecho a la vida en su modalidad a no ser privado de la misma, en relación con el uso inadecuado de la fuerza pública, que motiva una ejecución arbitraria.

IV. PROCEDIMIENTO ANTE LA COMISIÓN.

Con la finalidad de documentar las presuntas violaciones a derechos humanos, así como para determinar la existencia o no de responsabilidad por parte de los servidores públicos señalados, este Organismo realizó entrevistas a la relacionadas con los hechos; se recabaron comparecencias de elementos de la Policía Estatal Preventiva; se solicitaron informes a las autoridades señaladas como responsables, así como informes en vía de colaboración; se consultó la carpeta de investigación relacionada con los hechos y se realizó investigación de campo.

V. PRUEBAS.

Con base en lo estipulado en los artículos 48 y 49 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, en relación con los numerales 150, 151, 152, 153 y 154 del Reglamento Interior de este Organismo, durante el procedimiento realizado por esta Institución se recabaron los elementos probatorios documentales, que remitió la parte agraviada como las autoridades señaladas como responsables, así como documentación, dictámenes e inspecciones necesarios para emitir la resolución correspondiente.

VI. SOBRE LOS DERECHOS VULNERADOS.

A. Derecho a la vida en su modalidad a no ser privado de la misma, en relación con el uso inadecuado de la fuerza pública, que motiva una ejecución arbitraria.

1. El derecho a la vida y su lugar dentro de una concepción sistemática de los derechos humanos, es un derecho lo encontramos como inherente al ser humano por el simple hecho de serlo. Como derecho mismo, el derecho a la vida, tiene la estructura de los derechos subjetivos, es decir, supone una relación de bilateralidad, en primer lugar, la titularidad del derecho recaer en todas las personas de la familia humana, frente a la obligación también de toda la familia humana de respetar o cumplir con el deber correlativo del derecho a la vida y, por lo que hace al estado, también deberá de obrar de tal modo que respete la vida, y permita que se respete, es decir, debe contar con un fundamento jurídico que le de forma. Este derecho, constituye una conducta de respeto y compromiso para con la vida humana, propia o ajena, y que al derivar de la dignidad intrínseca de la persona humana es anterior y superior a las legislaciones escritas y a los acuerdos entre gobiernos, de modo que su reconocimiento tiene simplemente efectos declarativos, aunque la obligación que del tema deriva tiene efectos constitutivos en el sentido de que los Estados tendrán que adoptar las medidas necesarias a fin de que sea respetado y garantizado.[1]

2. En cuanto al derecho a la inviolabilidad de la vida, Massini, señala que éste “tiene su fundamento o justificación racional en la inminente dignidad de la persona humana y su contenido o materia está dado por el respeto al bien básico de la vida en cuanto modo propio de la existencia de los entes humanos, en otras palabras, la prestación que

[1] Suprema Corte de Justicia de la Nación. Serie de Derechos Humanos. Dignidad Humana, derecho a la vida y derecho a la integridad personas. P. 11. Salado Osuna, Ana. La pena de muerte en derecho internacional; Una excepción del derecho a la vida. España. Tecnos. 1999. P. 17.

corresponde a este derecho consiste en una conducta: acción u omisión, de respeto y salvaguarda al bien básico de la vida."[2]

3. En el marco internacional de protección de los Derechos Humanos, encontramos que el derecho a la vida, constituye un derecho básico y primario del que goza toda persona desde su existencia. En ese sentido, el artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, señala que, "[t]odo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona".[3] Asimismo, el artículo 6.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos señala que, "[e]l derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente."[4]

4. Por lo que hace a la protección regional de los derechos humanos, se contempla en el artículo 1 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, así como en los numerales 1.1 y 4.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establecen, respectivamente, que indican; "[l]os Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna […]".[5] Por lo que, "[t]oda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente."[6]

5. Por su parte, el Estado Mexicano, por conducto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que: "El derecho a la vida impone al Estado una obligación compleja, en tanto que no sólo prohíbe la privación de la vida [que se traduce en una obligación negativa, que no se prive de la vida], sino que también exige que, a la luz de la obligación de garantizar el pleno, libre y efectivo ejercicio de los derechos humanos, adopte medidas positivas para preservar ese derecho en el ámbito legislativo, judicial y administrativo […]".[7]

6. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el "Caso de las Masacres de Ituango Vs. Colombia", sostuvo respecto del derecho a la protección a la vida que: "[…] los Estados tienen la obligación de garantizar la creación de las condiciones necesarias para que no se produzcan violaciones de ese derecho inalienable, así como el deber de impedir que sus agentes o particulares, atenten contra el mismo".[8] También, puntualizó que, "el cumplimiento de las obligaciones impuestas por el artículo 4 de la Convención Americana, relacionado con el artículo 1.1 de la misma, no sólo presupone que ninguna persona sea privada de su vida arbitrariamente (obligación negativa), sino que además requiere, a la luz de su obligación de garantizar el pleno y libre ejercicio de los derechos humanos, que los Estados adopten todas las medidas apropiadas para proteger y preservar el derecho a la vida (obligación positiva) de quienes se encuentren bajo su jurisdicción".[9]

7. Asimismo, indicó que, "[e]sta protección activa del derecho a la vida por parte del Estado no sólo involucra a sus legisladores, sino a toda institución estatal y a quienes deben resguardar la seguridad, sean éstas sus fuerzas de policía o sus fuerzas armadas. En razón de lo anterior, los Estados deben adoptar las medidas necesarias, no sólo a nivel legislativo, administrativo y judicial, mediante la emisión de normas penales y el establecimiento de un sistema de justicia para prevenir, suprimir y castigar la privación de la vida como consecuencia de actos criminales, sino también para prevenir y proteger a los individuos de

---

[2] Ibidem. Massini C.I, "El Derecho a la vida en la sistemática de los Derechos Humanos. MASSINI C.I. y Serna, P. (eds) rescatado de, https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/12/5642/11.pdf

[3] Declaración Universal de Derechos Humanos, recatada de http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/, fecha de consulta 05 de octubre de 2020.

[4] Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/ccpr.aspx, fecha de consulta 05 de octubre de 2020.

[5] Convención Americana sobre Derechos Humanos, https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm, fecha de consulta 05 de noviembre de 2020.

[6] Ídem.

[7] Derecho a la vida. Supuesto en que se actualiza su transgresión por parte del Estado". Semanario Judicial de la Federación, enero de 2011, registro 163169.

[8] CrIDH, "Caso de las Masacres de Ituango Vs. Colombia", Sentencia de 1 de julio de 2006, párr. 130.

[8] Ídem, párr. 129.

[9] Ídem, párr. 130.

actos criminales de otros individuos e investigar efectivamente estas situaciones."[10] También, en el "Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa vs. Paraguay", la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estableció que, "[e]l derecho a la vida es un derecho humano fundamental, cuyo goce pleno es un prerrequisito para el disfrute de todos los demás derechos humanos. De no ser respetado, todos los derechos carecen de sentido."[11]

8. En la sentencia emitida por Corte Interamericana de Derechos Humanos (CrIDH) en el "Caso Vargas Areco Vs Paraguay", se puntualizó que: "[…] la obligación de garantizar el derecho reconocido en el artículo 4 de la Convención (Americana sobre Derechos Humanos, […] no sólo presupone que ninguna persona sea privada de su vida arbitrariamente [obligación negativa], sino que además requiere a la luz de su obligación de garantizar el pleno y libre ejercicio de los derechos humanos, que los Estados adopten todas las medidas apropiadas para proteger y preservar el derecho a la vida [obligación positiva] de quienes se encuentren bajo su jurisdicción. Esta protección activa del derecho a la vida por parte del Estado no sólo involucra a sus legisladores, sino a toda institución estatal y a quienes deben resguardar la seguridad, sean éstas sus fuerzas de policía o sus fuerzas armadas".[12]

9. Así las cosas, la protección del derecho a la vida supone prevenir la privación arbitraria, en particular mediante un marco apropiado de leyes, normativas, precauciones y procedimientos. También exige la rendición de cuentas por la privación arbitraria de la vida donde quiera que ocurra. A fin de asegurar el derecho a la vida los Estados deben:

a) Respetar el derecho a la vida. Los Estados, sus órganos y agentes, y aquéllos cuyo comportamiento sea atribuible al Estado, deben respetar el derecho a la vida y no privar arbitrariamente de éste a ninguna persona.
b) Proteger y hacer efectivo el derecho a la vida. Los Estados deben proteger y hace efectivo el derecho a la vida, entre otras cosas, mediante el ejercicio de la diligencia debida, para impedir la privación arbitraria de la vida por agentes privados. Los Estados deben cumplir con sus obligaciones en materia de diligencia debida de buena fe y de manera no discriminatoria. Por ejemplo, los Estados deben actuar con la diligencia debida para prevenir el uso de la fuerza física letal.
c) Investigar las muertes potencialmente ilícitas, asegurar la rendición de cuentas y brindar reparación por las vulneraciones. La obligación de investigar es una parte esencial de la defensa del derecho a la vida.[13] Esta obligación hace efectivos en la práctica los deberes de respetar y proteger el derecho a la vida, y promueve la rendición de cuentas y la reparación cuando pueda haberse vulnerado ese derecho sustantivo[14].
d) Sancionar, las conductas que atenten contra el derecho a la vida, en el orden jurídico mexicano cuando estas interfieren en la esfera de violación a los derechos humanos, deben ser sancionadas penal y administrativamente, además debe garantizarse la reparación del daño a las víctimas indirectas, ya que el Estado tiene la obligación de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley[15].

10. Una vez que no ha quedado lugar a dudas del lugar preponderante que ocupa el respeto al derecho a la vida, es preciso analizar las modalidades bajo las cuales el Estado, pese a la formalización de la estructura jurídica que sostiene el derecho a la vida, incurre en violaciones a este derecho, en los casos en que se ven involucrados funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, como es el caso que nos ocupa, estas violaciones se traducen en Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias y Sumarias.

---

[10] Ídem, párr. 131.
[11] CrIDH, "Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay, Sentencia de 29 de marzo de 2006 (Fondo, Reparaciones y Costas), párr. 150.
[12] Sentencia de 26 de septiembre de 2006, párrafo 75.
[13] Véase, por ejemplo: Tribunal Europeo de Derechos Humanos McCon y otros c. El Reino Unido. Sentencia /Gran Sala/ 27 de septiembre de 1005. Párr. 161; Corte IDH Montero Aranguren y otros. Reten de Catia vs Venezuela. Sentencia 5 de julio 2006 párr. 66. Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, observación general núm. 3 sobre del derecho a la vida. noviembre de 2015. Párr. 2 y 15, Comité de Derechos Humanos, observación general núm. 31 párrafo 15 y 18.
[14] Cfr. Marco Jurídico del PROTOCOLO DE MINNESOTA sobre la investigación de muertes potencialmente ilícitas (2016), Versión revisada del Manual de las Naciones Unidas sobre la Prevención e Investigación Eficaces de las Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias o Sumarias
[15] Cfr. Párrafo tercero del artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

11. Al respecto, en el Protocolo Modelo para la Investigación Legal de Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias y Sumarias, se considera que la violación del derecho a la vida a través de la ejecución arbitraria se produce como consecuencia de: "[…] homicidios perpetrados por orden del gobierno o con la complicidad o tolerancia de este, incluyendo igualmente los fallecimientos durante la detención o prisión como consecuencia de tortura, malos tratos […] o de otro tipo".[16] Las modalidades de ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias de acuerdo con el "Protocolo de Minnesota" son las siguientes:

- **"Muerte como consecuencia del uso de la fuerza por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, cuando ese uso no obedece a los criterios de necesidad, racionalidad y proporcionalidad.**
- Muerte como consecuencia de un ataque por Agentes del Estado en operaciones militares o policiales sin que medie ninguna justificación legal amparada por el derecho internacional.
- Muerte de una persona detenida como resultado de condiciones inadecuadas de su privación de la libertad o en circunstancias poco claras que pongan en entredicho el deber de garantía del Estado. Si esa privación de la libertad es ilegal se estaría ante un concurso entre una detención arbitraria y homicidio.
- Muerte como resultado de una desaparición forzada cometida por agentes del Estado, así no aparezca el cuerpo de la víctima o sólo si aparecen algunos de sus restos. En esta situación la ejecución concurre con la desaparición forzada en concurso de delitos, entre la desaparición y el homicidio.
- Muerte como resultado de torturas y otros tratos y penas crueles, inhumanas o degradantes perpetrada por Agentes del Estado. Aquí también se produce otro concurso de delitos entre la tortura y el homicidio.[17]

12. En el caso concreto, **VD†** perdió la vida el 11 de enero de 2020, día en que iniciaba su jornada de trabajo, por herida producida por proyectil disparado por arma de fuego, cuyo orificio de entrada fue en labio superior, cuya deflagración creó un tatuaje de veinticinco por veintiséis centímetros localizada en toda la extensión de cara y cara anterior y lateral tercio superior del cuello. Proyectil que interesó esta parte del cuerpo, con una dirección de adelante atrás, izquierda a derecha y de arriba abajo, piel, músculo y mucosa de labio superior, fracturó dientes superiores e inferiores, perforó lengua en la cara superior, y laceró cara inferior, fracturó segunda y terceras vértebras cervicales, contundió cráneo en parte inferior del lado derecho y fracturó piso posterior derecho de cráneo sin penetrar a cavidad craneana, finalmente laceró músculo, tejido celular subcutáneo y piel, para salir por el tercio superior del cuello, en su cara posterior. Según lo descrito en el certificado médico de Necropsia, de fecha 11 de enero de 2020, a cargo de la **DRA. KARLA FARADY LÓPEZ REYES,** Perita Médica Legista de la Dirección General de Servicios Periciales, de la Fiscalía General de Justicia del Estado.

13. Pérdida de vida de **VD†** que, pese a que ocurrió circunstancialmente bajo las condiciones antes citadas, es decir, no obedeció al uso esperado de las armas de fuego, y también se dejaron de observar los criterios de necesidad, racionalidad o proporcionalidad, ya que en el caso concreto no era necesario el uso de armas de fuego y no fue racional el intercambio de la misma. Esta pérdida de vida tampoco ocurrió como resultado de condiciones inadecuadas en la privación de la libertad, como desaparición forzada de personas o resultado de torturas y otros penas y tratos crueles inhumanos y degradantes, pero sí acaeció en el ejercicio de su deber ya que el día de su deceso **VD†**, se encontraba en servicio, iniciando la jornada laboral. Asimismo, es pertinente precisar que, si bien **VD†** no perdió la vida en lo que podría esperarse como el ejercicio de su deber, ya que no obedeció a un evento de uso legítimo de fuerza pública o enfrentamiento armado contra personas que incumplen la ley, sino derivó de la incapacidad del manejo de arma de fuego de un compañero de trabajo, también elemento de la Policía Estatal Preventiva, por lo que el Estado de Zacatecas, es responsable institucional de la perdida de una vida humana, concretamente de un funcionario encargado de hacer cumplir la ley que se encontraba a su servicio.

---

[16] Rescatado de, file:///C:/Users/Usuario/Downloads/MinnesotaProtocol_SP.pdf
[17] Cfr. Objetivos y ámbito de aplicación del Protocolo de Minnesota de 2016, Ídem, pág. 1.

B) Uso excesivo (negligente) de la fuerza pública.

14. El uso de la fuerza pública, es la facultad de inhibición por medios mecánicos o biomecánicos, de forma momentánea o permanente, de una o más funciones corporales que lleva a cabo una persona autorizada por el Estado sobre otra, siguiendo los procedimientos y protocolos que establecen las normas jurídicas aplicables[18].

15. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, tienen bajo su responsabilidad la seguridad pública, entendida como la función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes en la materia. La seguridad pública comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que la Constitución señala.

16. Consecuentemente, el uso de la fuerza pública tiene entre sus fines el de preservar y salvaguardar la vida, así como las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas. Es precisamente, la responsabilidad del Estado de salvaguardar la vida, que se incumplió para con **VD†**, ya que perdió la misma a manos de la falta de previsibilidad vinculada con un vicio de la voluntad a partir del cual se omitió voluntariamente aquello que debía prever[19] lo previsible. Esto es así porque la actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

17. Los Organismos Defensores de Derechos Humanos, no se oponen “a las acciones que las autoridades de los diversos ámbitos de gobierno lleven a cabo para garantizar la seguridad pública de las personas, ni rechaza el empleo de la fuerza cuando los cuerpos policiales enfrentan situaciones en las cuales la única opción es repeler una agresión real, actual e inminente en defensa de su integridad física o de otras personas y/o sus derechos; circunstancia que no los exime del respeto irrestricto a los derechos humanos.”[20] Más ponderan la necesidad de que el uso de la fuerza sea acorde a los principios que la rigen y sobre todo, con la correspondiente capacitación y adiestramiento en su uso.

18. Los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley de las Naciones Unidas, precisa en el numeral 4 que, “[l]os funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en el desempeño de sus funciones, utilizarán en la medida de lo posible medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza y de armas de fuego. Podrán utilizar la fuerza y armas de fuego solamente cuando otros medios resulten ineficaces o no garanticen de ninguna manera el logro del resultado previsto.”[21]

19. Asimismo establece, en el diverso 5 que, “[c]uando el empleo de las armas de fuego sea inevitable, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley:”[22]

> a) Ejercerán moderación y actuarán en proporción a la gravedad del delito y al objetivo legítimo que se persiga;
> b) Reducirán al mínimo los daños y lesiones y respetarán y protegerán la vida humana;
> c) Procederán de modo que se presten lo antes posible asistencia y servicios médicos a las personas heridas o afectadas;
> d) Procurarán notificar lo sucedido, a la menor brevedad posible, a los parientes o amigos íntimos de las personas heridas o afectadas.[23]

---

[18] Cfr. fracción XIV, artículo 3 de la LEY NACIONAL SOBRE EL USO DE LA FUERZA, Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2019.
[19] Jiménez de Asúa, Luis, La ley y el delito, Buenos Aires, 1953 p. 46
[20] CNDH, Recomendación No. 58/2017, de 13 de noviembre de 2017, párr. 96.
[21] Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/UseOfForceAndFirearms.aspx, fecha de consulta 05 de noviembre de 2020.
[22] Ídem.
[23] Ídem.

20. Además, en el Principio 9 del instrumento internacional invocado, se hace especial énfasis en que, "[l]os funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no emplearán armas de fuego contra las personas salvo en defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o lesiones graves, o con el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una seria amenaza para la vida, o con el objeto de detener a una persona que represente ese peligro y oponga resistencia a su autoridad, o para impedir su fuga, y sólo en caso de que resulten insuficientes medidas menos extremas para lograr dichos objetivos. En cualquier caso, sólo se podrá hacer uso intencional de armas letales cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida."[24]

21. Y que en caso de hacer uso de ellas, el Principio 6 señala que, "[c]uando al emplear la fuerza o armas de fuego los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley ocasionen lesiones o muerte, comunicarán el hecho inmediatamente a sus superiores de conformidad con el principio 22."[25] El cual establece que, "[e]n caso de muerte y lesiones graves u otras consecuencias de importancia, se enviará rápidamente un informe detallado a las autoridades competentes para la revisión administrativa y la supervisión judicial."[26]

22. El Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de las Naciones Unidas, establece en su artículo 3 que, "[e]n el desempeño de sus tareas, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley respetarán y protegerán la dignidad humana y mantendrán y defenderán los derechos humanos de todas las personas."[27]

23. Por su parte, el Estado mexicano, ha estandarizado estos principios en la Ley Nacional Sobre el Uso de la Fuerza. Así el uso de la fuerza, se rige por los principios de;

I. Absoluta necesidad: para que el uso de la fuerza sea la última alternativa para tutelar la vida e integridad de las personas o evitar que se vulneren bienes jurídicamente protegidos o con el fin de mantener el orden y la paz pública, al haberse agotado otros medios para el desistimiento de la conducta del agresor;
II. Legalidad: para que la acción de las instituciones de seguridad se realice con estricto apego a la Constitución, a las leyes y a los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte;
III. Prevención: para que los operativos para el cumplimiento de la ley sean planificados y se lleven a cabo, en la medida de lo posible, minimizando el uso de la fuerza y, cuando esto sea inevitable, reduciendo al mínimo los daños que de ello puedan resultar;
IV. Proporcionalidad: para que el nivel de fuerza utilizado sea acorde con el nivel de resistencia ofrecido por el agresor y el nivel de riesgo exhibido, de tal forma que los agentes apliquen medios y métodos bajo un criterio de uso diferenciado y progresivo de la fuerza, y
V. Rendición de cuentas y vigilancia: para que existan controles que permitan la evaluación de las acciones de uso de la fuerza y sea valorada su eficacia en términos del desempeño de las responsabilidades y funciones previstas por esta Ley[28].

24. Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sostuvo en la Recomendación General 12, de 26 de enero de 2006, sostuvo que, "sobre el uso legítimo de la fuerza y de las armas de fuego por los funcionarios o servidores públicos encargados de hacer cumplir la ley existen principios comunes y esenciales que rigen el uso de las mismas, como son la legalidad, la congruencia, la oportunidad y la proporcionalidad."[29]

25. La legalidad se refiere a que "los actos que realicen dichos servidores públicos deben estar expresamente previstos en las normas jurídicas. La congruencia es la utilización del medio adecuado e idóneo que menos perjudique a la persona y a la sociedad. La oportunidad consiste en que dichos funcionarios deben actuar inmediatamente, con su mejor

---

[24] Ídem.
[25] Ídem.
[26] Ídem.
[27] Ídem.
[28] LEY NACIONAL SOBRE EL USO DE LA FUERZA. Artículo 5.
[29] CNDH, Recomendación General 12, de 26 de enero de 2006, http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/generales/RecGral_012.pdf, de fecha de consulta 05 de noviembre de 2020.

decisión, rapidez y eficacia cuando la vida u otro bien jurídico de alto valor estén en grave e inminente peligro y no haya más remedio que neutralizar con la fuerza o con las armas rápidamente al causante del mismo."[30]

26. Mientras que, "la proporcionalidad significa la delimitación en abstracto de la relación de adecuación entre medio y fin en las hipótesis imaginables de uso de fuerza y armas de fuego y la ponderación de bienes en cada caso concreto. Respecto del uso de la fuerza, en la medida de lo posible, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley recurrirán a medios no violentos antes de utilizarla. Actuarán como respuesta a una conducta desarrollada por la persona a la que deben detener, someter y asegurar."[31]

27. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha señalado que el uso de la fuerza por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley es legítimo "en los casos estrictamente inevitables para protegerse o proteger a otras personas contra una amenaza inminente de muerte o lesiones graves, o mantener por otros medios la ley y el orden cuando sea estrictamente necesario y proporcionado". Esta acción debe constituir siempre "el último recurso para asegurar los derechos amenazados frente a hechos delictivos o violentos, a la vez que este tipo de intervenciones debe regirse estrictamente por los principios que aseguren la licitud de la actuación de las fuerzas policiales". En este sentido, su uso debe ser ejercido con moderación y con proporción al objetivo legítimo que se persiga y "tendrá como regla de actuación la reducción al mínimo de los daños y lesiones que pudieran causar al agresor".

28. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha reconocido que "los Estados tienen la obligación de garantizar la seguridad y mantener el orden público dentro de su territorio y, por tanto, tienen el derecho de emplear legítimamente la fuerza para su restablecimiento de ser necesario. Si bien los agentes estatales pueden recurrir al uso de la fuerza y en algunas circunstancias, se podría requerir incluso el uso de la fuerza letal, el poder del Estado no es ilimitado para alcanzar sus fines independientemente de la gravedad de ciertas acciones y de la culpabilidad de sus autores."[32] En ese sentido, "el uso excepcional de la fuerza letal deberá estar formulado por ley, y ser interpretado restrictivamente de manera que sea minimizado en toda circunstancia, no siendo más que el "absolutamente necesario" en relación con la fuerza o amenaza que se pretende repeler."[33]

29. Por su parte, los Lineamientos Generales para la Regulación del Uso de la Fuerza Pública por las Instituciones Policiales de los Órganos Desconcentrados en la Secretaria de Seguridad Publica, establece en sus artículos 8, 9, 10, 11, 12 y 13 que, en el uso de la fuerza pública, los Integrantes de las Instituciones Policiales deberán apegarse a los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, racionalidad y oportunidad. Entendiéndose por el principio de legalidad, el hecho de que, "todo servidor público debe regir su actuación a lo que la Ley específicamente le faculte, así como para cumplimentar orden emitida por autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento."[34]

30. El principio de necesidad significa que "sólo cuando sea estrictamente necesario e inevitable los Integrantes emplearán la fuerza para impedir la perturbación del orden público y para restablecerlo."[35] El principio de proporcionalidad implica que "el uso de la fuerza será adecuado y en proporción a la resistencia o agresión recibida, atendiendo a su intensidad, duración y magnitud. Este principio impone que no se deberá actuar con todo el potencial de una unidad si las personas contra las que se usa la fuerza se encuentran en una situación cuantitativa y cualitativa inferior. En consecuencia, la fuerza empleada debe ser prudente y

---

[30] Ídem.
[31] Ídem.
[32] CrIDH, "Caso Cruz Sánchez y Otros Vs. Perú", Sentencia de 17 de abril de 2015, (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones Y Costas), párr. 262.
[33] Ídem, párr. 263.
[34] Acuerdo 04/2012 del Secretario de Seguridad Pública, por el que se emiten los Lineamientos Generales para la Regulación del Uso de la Fuerza Pública por las Instituciones Policiales de los Órganos Desconcentrados en la Secretaria de Seguridad Publica http://dof.gob.mx/nota_detalle.php%3Fcodigo%3D5244759%26fecha%3D23/04/2012, fecha de consulta 05 de noviembre de 2020.
[35] Ídem.

limitada, sólo para alcanzar el control y neutralización de la agresión. El uso de la fuerza está en directa relación con los medios que emplean las personas que participan en la agresión, su número y grado de hostilidad."[36]

31. La racionalidad en el uso de la fuerza implica que, "ésta será empleada de acuerdo a elementos objetivos y lógicos con relación a la situación hostil que se presenta, a efecto de valorar el objetivo que se persigue, las circunstancias del caso y las capacidades tanto del sujeto a controlar como la de los propios Integrantes."[37] Y la oportunidad en el uso de la fuerza pública "tenderá a la actuación policial inmediata para evitar o neutralizar un daño o peligro inminente o actual, que vulnere o lesione la integridad, derechos o bienes de las personas, las libertades, la seguridad ciudadana o la paz pública."[38]

32. Así las cosas, la perdida de la vida de **VD†**, no obedeció a ningún tipo de necesidad, ya que para ello se requiere que el uso de la fuerza letal, sea la última alternativa para tutelar precisamente la vida e integridad de otras personas o evitar que se vulneren bienes jurídicamente protegidos o con el fin de mantener el orden y la paz pública y, sobre todo, que se hayan agotado otros medios para el desistimiento de la conducta del agresor que está poniendo en riesgo estos bienes jurídicos. En este caso, **VD†** se encontraba en funciones de Policía Estatal Preventivo, no realizaba ninguna conducta que pusiera en riesgo ningún bien jurídico y, en consecuencia, tampoco se había agotado otros mecanismos no letales para persuadirlo de su acción. **VD†**, estaba en el patio de servicio de la Policía Estatal Preventiva, en espera de que se le asignara unidad radio patrulla, para realizar sus funciones y se permitió resguardar el arma de su compañero de trabajo, para que éste se moviera con mayor agilidad hasta otra área, en donde le fue entregado un radio, y sin embargo cuando su compañero recibió de regreso su arma, la accionó en su contra, privándole de la vida. Es decir, no era estrictamente necesario y menos inevitable ese uso de arma.

33. Por su parte, la proporcionalidad en el uso de la fuerza, debe de ser acorde al grado de resistencia o agresión recibida, atendiendo a su intensidad, duración y magnitud. En este caso, **VD†** no ejerció resistencia, agresión o ningún tipo de conducta que pusiera en riesgo bienes jurídicos. En consecuencia, la fuerza empleada fue imprudente, causando un homicidio precisamente con esa calificativa, según se desprende de la causa penal […], que por el delito de Homicidio se siguió en contra del autor material de la perdida de la vida humana a que hemos hechos referencia. Mismo que concluyera con su responsabilidad penal, asumida mediante la forma de terminación anticipada del proceso, denominado procedimiento abreviado[39].

34. La conducta de **JUAN EDUARDO AVITIA VILLEGAS**, también careció de legalidad, ya que el uso imprudencial de la fuerza letal, no puede estar previsto en la Constitución, las leyes y los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano es parte, debe entenderse como una conducta previsible que, al afectar bienes jurídicos tutelados, deben ser analizados a la luz del derecho penal, como al efecto ha sucedido.

35. La ausencia de racionalidad en el uso de la fuerza que concluyó con la perdida de la vida de **VD†**, se evidencia ante la ausencia de elementos objetivos y lógicos para su uso. Como se ha sostenido, el uso de la fuerza no fue para repeler una situación hostil, sino por descuido negligente en el resguardo del arma de cargo de **JUAN EDUARDO AVITIA VILLEGAS** quien no se enfrentaba ante una situación de riesgo en donde debía de realizar una valoración para decidir el uso del arma de cargo y con ello conseguir el objetivo que de seguridad que se persigue en las corporaciones policiacas. El uso del arma de cargo fue irracional también porque las circunstancias del caso, no lo ameritaban.

36. Se tiene por cierto que, se dejó de observar también el principio de oportunidad en el uso de la fuerza pública, pues ésta consiste en desplegar una acción policía inmediata u oportuna para evitar o neutralizar un daño o peligro actual e inminente, que vulnere o lesione la integridad de las personas o sus derechos y bienes o bien conculque las libertades, la

---

[36] Ídem.
[37] Ídem.
[38] Ídem.
[39] Cfr. Artículo 185 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

seguridad ciudadana o la paz pública. En el caso que se analiza. No existía peligro alguno, ni estaban en riesgo bienes o derechos de terceros, sino que se realizaba una acción rutinaria, como lo es solicitar equipo de comunicación y unidades radio patrullas para posteriormente abordarlas y realizar las funciones diarias de seguridad pública, por lo que el uso de arma de fuego en este momento fue inoportuno.

37. Por lo que hace a la prevención, es precisamente el área que más dejó de atender, ya que tanto **JUAN EDUARDO AVITIA VILLEGAS**, como la institución policía para la que trabajaban tanto él como **VD†**, omitieron prever la conducta lamentable que nos ocupa. Es dable creer la falta de prevención, con el dicho del propio **AVITIA VILLEGAS**, quien, en declaración rendida ante personal de este Organismo, se reconoció como suboficial de la Policía Estatal Preventiva, declaró tener una antigüedad de 9 años dentro de esa corporación. No obstante, no pudo evitar que, el 11 de enero del 2020, su impericia causara la perdida de una vida humana.

38. Es él mismo quien detalla las actividades de rutina que realizó el 11 de enero de 2020; a las 7:23 horas ingresó a laborar, con un horario de 24 horas; formaba parte de la Banda de Guerrera de la Policía Estatal Preventiva, y posterior a pasar lista, participó en los ensayos de la citada Banda de Guerra, aproximadamente hasta las 9:30 horas. Posterior al ensayo, se fue a equipar, es decir, a recibir y portar las armas de cargo que tenía asignadas, que eran un arma larga y un arma corta. La recepción de las armas se realiza en la armería de la misma corporación, en donde deben hacerse medidas de seguridad, es decir, verificar el cargado y seguros de las armas.

39. Reiteró que, le hizo entrega también de un uniforme nuevo, el que recibió en donde se entregan y resguardan los chalecos balísticos. Posteriormente, se dirigió al área del parque vehicular para solicitar una unidad disponible, para realizar las funciones que tenía encomendadas para ese día. En el lugar de estacionamiento, dijo, se encontraban también otros elementos de la Policía Estatal Preventiva, quienes esperaban les fuera asignada una unidad radio patrulla. Es ya en el patio de servicio, que se percató que no traía radio de comunicación y decidió regresar para que, le asignaran uno. Para lo cual, solicita que personal a cargo de motocicletas, le prestara una unidad radio patrulla de ese tipo, es decir, una motocicleta y así regresar por el radio de comunicación que no había solicitado aún. Previo a lo que le solicitó a **VD†** que, resguardara su arma larga, de la que aseguró no manipuló, es decir, asumía que tenía los seguros puestos. Una vez que solicitó le resguardaran el arma larga a su cargo, subió en la motocicleta por el radio, se hizo acompañar del oficial **GILBERTO JIMÉNEZ DE SANTIAGO**, recibió el radio que le fue asignado, regresó a la unidad radio patrulla y nuevamente se trasladó al área de parque vehicular, lo que realizaron ahora a pie.

40. De igual manera detalló que, en esta área solicitó del comandante de apellido **SORIANO,** la unidad radio patrulla marcada con el número 465, a efecto de realizar sus labores de patrullaje, misma que le fue concedida, la que encarga para su cuidado al oficial de nombre **JOSÉ ALFREDO MORALES SAUCEDO.** Posteriormente, narró el momento en que pierde la vida **VD†,** y es precisamente al recibir el arma larga marca GALIL calibre 0.223, que tenía bajo su cargo, y que previamente había solicitado a **VD†** que se la resguardara que, aseguró que al momento de intentar colgársela se le iba a resbalar involuntariamente, dijo que la sujetó con el antebrazo derecho de la culata, y de la empuñadura y por la reacción introdujo sus dedos al disparador del cual salieron a su entender, dos o tres disparos continuos, que se impactaron en la persona de **VD†** quien por esa acción perdió la vida.

41. Como puede verse, las acciones realizadas por **JUAN EDUARDO AVITIA VILLEGAS**, no fueron planificadas. En primer lugar, éste sabedor que era responsable del radio, no lo solicitó de manera inicial, como de forma planificada debió hacerlo, sino que, por el contrario, solicitó las armas de carga, recogió uniforme nuevo, buscó que le fuera asignada unidad radio patrulla y es hasta que se encontraba ya con todo este equipamiento y en el área de patrullas, ya listo para salir, fue que recordó que no había pedido el radio para mantenerse en comunicación. Motivo por el cual, decide realizar otra actividad, también no planificada, y está fuera de todo protocolo, como lo fue, solicitar como él lo refiere, que **VD†** resguardara el arma larga a su cargo, para él trasladarse más cómoda o rápidamente al área en donde le

fue entregado el radio de comunicaciones. Acciones que, al no ser planeadas, es decir, no realizarse de acuerdo a los lineamientos propios de la corporación policiaca, provocaron el uso imprudente de la fuerza letal, en agravio de **VD†.**

42. Otros de los principios que rigen el uso de la fuerza pública, es la rendición de cuentas y vigilancia. Vigilancia que, de ser puntual permite que existan controles que favorecen la evaluación de las acciones de uso de la fuerza y sea valorada su eficacia en términos del desempeño de las responsabilidades y funciones previstas por esta Ley. En el caso concreto, esta responsabilidad debe ser asumida por la propia corporación policiaca, es decir, por la Policía Estatal Preventiva quien omitió una estricta vigilancia y control del uso de las armas de fuego que se encuentran a cargo de la propia corporación de manera general y asignadas en lo individual a los efectivos en activo.

43. De la investigación de los hechos, se tiene por cierto que, la conducta que se le atribuyó a **JUAN EDUARDO AVITIA VILLEGAS,** fue producto de la combinación de la ausencia de control, vigilancia y capacitación que le brindó la corporación policiaca para la que se desempeña y la impericia y negligencia personal y, derivado de esa ausencia de capacitación y control, **AVITIA VILLEGAS** y **VD†,** participaron en una acción fuera de todo cuidado, como fue el permitir dejar en manos de terceras personas una de sus armas de cargo, las que de acuerdo al oficio de fecha 01 de junio de 2020, mediante el cual se le asignaron las mismas, asume la responsabilidades penales y administrativas que de su mal uso se deriven. Se entiende entonces, que con el hecho de haber permitido que otra persona no responsable de esas armas tuviera contacto con una de ellas, incumplió así con su responsabilidad de resguardo de esa arma de cargo.

44. Para acreditar que el que **JUAN EDUARDO AVITIA VILLEGAS,** haya solicitado temporalmente que se resguardara su arma, se tiene el dicho del Policía Tercero **ARMANDO BELMONTES FLORES**, quien ante personal de este Organismo detalló como **AVITIA VILLEGAS** solicitó a **VD†** que resguarda su arma larga para regresar por un radio, ya que es responsabilidad de los comandantes responsables de las patrullas traer el radio consigo. Dijo, además, que le encargó el resguardo del arma precisamente a **VD†**, al parecer porque era quien estaba enfrente de una unidad y más cerca de donde estaba el comandante **AVITIA VILLEGAS.** En adición, al igual que éste, detalló cómo es que también solicitó una motocicleta para trasladarse hasta el lugar en donde estaban los radios. Lo cierto es que, solicitó que alguien más resguardara su arma de cargo, para hacer fácil su traslado a otro lugar, por el hecho de haber olvidado recoger el radio de comunicación.

45. El citado policía tercero, a pregunta expresa de personal de este Organismo respecto a que indicara las circunstancias en que es posible transferir, al menos momentáneamente, la responsabilidad del resguardo del arma de cargo, respondió literalmente que: "*Pues el arma de cargo, en el momento que nos dieron los cursos nos dijeron que el arma no se presta por ningún motivo, por eso está a nuestro cargo*." Respuesta contundente que denota la prohibición expresa de permitir que terceras personas se ocupen del arma de cargo, y que **AVITIA VILLEGAS** desatendió, como también dejó de observar el mejor momento para solicitar y recibir el radio de comunicación, olvido que propició que por comodidad de su traslado encargara el arma de cargo, y con ello el devenir de sucesos que terminó en una perdida fatal.

46. De ahí la importancia que, en tratándose de las rutinas y protocolos de las corporaciones policiacas, las actividades de rutina y previsibles se cumplan de manera estricta, ya que, relajar el cumplimiento de los protocolos, aunque puedan parecer mínimos, como en este caso, acarrear consecuencias fatales, y con ello la responsabilidad administrativa y penal en su caso, que de ello derivan.

47. Ahora bien, en cuanto a protocolo de entrega recepción de un arma de fuego, es el mismo Policía Tercero **ARMANDO BELMONTES FLORES**, quien detalló que esto sucede en el área de armería, al inicio de la jornada y entre el responsable del arma y el armero, o encargado del cuarto de armamento, de lo que aseguró que: "*El arma se entrega con la culata hacia la persona que la va a recibir, el armero la toma de la empuñadura y el cañón apuntando hacia la persona que la entrega, el que la recibe la toma por la empuñadura y de*

la culata, esto se hace de rutina en el área de armería…", rutina que se asume se repitió en este otro momento de entrega y recepción del arma, es decir en la entrega de arma entre **AVITIA VILLEGAS** y **VD†** ya que, el hecho de que los proyectiles se hayan impactado en la persona que entregó el arma denota que no se siguió el procedimiento citado, desatendiendo la capacitación en el manejo de armas les hayan proporcionado a ambos.

48. Por lo que hace a las indicaciones a seguir al momento de iniciar la jornada laboral de un Policía Estatal Preventivo, concretamente, las que se desarrollan al momento de recibir las armas, tenemos que: al finalizar la jornada anterior, se entregan las armas de cargo con el responsable de la armería, éstas se entregan sin cartucho en la recámara, y sin el cargador puesto, ya que estos se entregan por separado, pero abastecidos. Es en estas condiciones que se reciben por parte del armero, al inicio de la siguiente jornada de trabajo. Lo que se tiene por cierto con la respuesta de la pregunta expresa que personal de este Organismo le realizó a **ARMANDO BELMONTES FLORES,** policía tercero, para que indicara en qué momento se tiene la orden de traer o tener las armas de cargo con los seguros puestos y no tener cartucho en la recamara. A lo que respondió que, "*cuando nosotros entregamos el arma a la armería, debe ir sin cargadores y sin cartucho en la recamara, para ello hay un espacio para hacer medidas de seguridad*."

49. El mismo oficial, aseguró que al momento de concluir la jornada de trabajo y entregar las armas de cargo, estas se reciben por parte del responsable de armería, quien las recibe y también recibe los cargadores, los que verifica que estén abastecidos, los que presiona para verificar que estén completamente cargados, y en el caso de que falte un cartucho él hace la observación al oficial que te hace falta un cartucho, para su reposición y guarda armas y cargadores en el área correspondiente.

50. Se tiene por cierto que no se cumplieron con las reglas de oro, es decir, que tenga además los seguros puestos, ya que, a dicho del citado policía tercero, a pregunta expresa de personal de este Organismo, en relación al momento en que está indicado tener cargada la recámara de un arma aseguró que: "Cuando andamos de rondín todo el tiempo la indicación es de no tener cartucho en la *recamara por seguridad de nosotros y de las personas y solo se corta cartucho cuando lo es necesario por un evento de riesgo*". Riesgo que no se había presentado, de ahí que tenemos por cierto que, pese a los más de nueve años de servicio, la impericia de **AVITIA VILLEGAS** resultó fatal.

51. En tanto que, **AVITIA VILLEGAS** indicó que no maniobró su arma, es decir, que cumplió con los protocolos establecidos para su manejo e intercambio. No obstante, es evidente que no se acataron las medidas de seguridad que deben de tenerse, y que se observan en las placas alusivas a las medidas de seguridad del campo de tiro, que considera reglas de oro en el uso y manejo de armamento; considerar que un arma está cargada y abastecida hasta demostrar lo contrario; no introducir el dedo en el disparador ni apuntar a nada ni nadie, que no se quiera causarle daño y en todo momento portar las armas con el cañón con dirección al suelo, lo que en este caso no ocurrió, ya que el proyectil disparado no se impactó en el suelo sino en la cara de **VD†**.

52. Por lo anterior, y pese a que no es posible determinar con exactitud que haya sido **AVITIA VILLEGAS** quien en algún momento previo, dejó al arma amartillada y sin seguros, condición indispensable para que los proyectiles se hayan disparado, ya que éste aseguró que, al momento de recibir las dos armas que estaban a su cargo, ejecutó las medidas de seguridad que están estipuladas, y se desconoce en qué momento y quién martilló el arma y le quitó los seguros, sin embargo, al asegurar que, dejó de resguardar una de ellas dejándola en poder de **VD†,** no quita la responsabilidad de quien legalmente tenía la portación de esa arma, el que es responsable de verificar que no se tenga tiro en la recamara, considerar en todo momento que estaba cargada, no colocar el dedo en el disparador o gatillo, colocar el cañón del arma con dirección al piso, entre las demás reglas de oro, que resultan ser medidas preventivas de observancia obligatoria.

53. En otro orden de ideas, se sostiene que la ausencia de control de arma de fuego es responsabilidad institucional de la propia Policía Estatal Preventiva tras la concatenación lógica y jurídica de las evidencias que obran en el presente expediente de queja. En primer

lugar, tenemos que, del dicho del propio **JUAN EDUARDO AVITIA VILLEGAS,** este tenía una antigüedad de más de nueve años laborando para la corporación policiaca. Temporalidad que se acredita con el oficio marcado con el número SSP/CA/RH/0183/2010, que obra en el expediente laboral del mismo, en donde se ordenó el alta de nueva creación a partir del 04 de enero de 2011, para que este se desempeñara como Suboficial de la Dirección de la Policía Estatal Preventiva. Es decir, que efectivamente, la antigüedad de la persona involucrada en los hechos sí era de más de nueve años, tiempo durante el cual, se infiere portó y tuvo bajo su responsabilidad dos armas de fuego, una conocida como arma corta, pistola Sig Sauer, calibre 9mm, con matrícula 24B221179, dos cargadores y 30 cartuchos útiles. Así como un arma de las identificadas como largas, siendo un fusil marca GALIL I.W.I. Automático, calibre 5.56 X 45 MM, tres cargadores y 105 cartuchos útiles, según consta en el resguardo de armamento de fecha 01 de julio de 2019, perteneciente a la propia Secretaria de Seguridad Pública. Esto de conformidad con el resguardo de armamento y equipo del 01 de junio de 2019, que se aportó al interior de la Carpeta de Investigación de número […].

54. Para acreditar el tipo de formación que se recibe previo a formar parte de la Policía Estatal Preventiva, se aportó copia de la estructura curricular de los cursos que se reciben en el Instituto de Formación Profesional el primero: Curso de Formación Inicial (aspirantes) para Policía Estatal Preventivo, consistente en 972 horas, de las que 260, son para el desarrollo de técnicas y de 30 horas de cultura de legalidad; 40 horas de derechos humanos; 20 horas de introducción al derecho y la seguridad pública; 20 horas de nociones de derechos penal; 40 horas de la actuación policía dentro del sistema de justicia penal; 40 para la capacidad del primer respondiente para procesar el lugar de los hechos; 40 de taller de primer respondiente y juicios orales, y, 20 horas de justicia para adolescentes.

55. El segundo curso, consistente en el Curso de Formación Inicial (equivalente) para Policía Estatal Preventivo, este curso taller está diseñado para el cumplimiento de 486 horas, de formación en diversas materias, siendo solo 130 horas para técnicas y tácticas policiales, entre las que, pese a no contar con los objetivos de la misma, se infiere comprende el manejo de armas de fuego. Adicionalmente, y por lo que hace a su estructura curricular, estuvo compuesta de 15 horas de cultura de legalidad; 20 horas de derechos humanos; 10 horas de introducción al derecho y la seguridad pública; 10 horas de nociones de derechos penal; 20 horas de la actuación policía dentro del sistema de justicia penal; 20 para la capacidad del primer respondiente para procesar el lugar de los hechos; 20 de taller de primer respondiente y juicios orales, y, 10 horas de justicia para adolescentes.

56. Así las cosas, para el uso y adecuado manejo de armas de fuego se recibieron 260 más 130 horas. 390 horas que, resultaron insuficientes para la protección y vida incluso de su propio compañero de servicio, esto es así porque como se dijo **JUAN EDUARDO AVITIA VILLEGAS,** ingresó a laborar el 4 de enero de 2011, y se ordenó su comisión mediante oficio SSP/CA/RH/0183/2010 2010, del 23 de enero de 2010, tiempo durante el cual se infiere, recibió la capacitación antes citada, y con ella las 390 horas en el uso y manejo de las armas de fuego que estarían a su cargo y bajo su más estricta responsabilidad.

57. Adicional a la formación inicial básica, se tiene que, para acreditar que **JUAN EDUARDO AVITIA VILLEGAS,** contaba con la capacitación adecuada para manejar las dos armas de cargo, que tenía asignadas, la autoridad involucrada aportó copia de dos constancias de capacitación, consistentes en: Curso de Especialización en Técnicas de la Función Judicial y Curso Taller para Oficial Primer Respondiente y Procesamiento del Lugar de los Hechos, desarrollado en el Instituto de Formación Profesional, en los días del 23 al 27 mayo de 2016, y del 30 mayo al 03 junio de 2016, respectivamente, mismos que, como su nombre lo indica, se avocan al conocimiento de los deberes y obligaciones de los oficiales primeros respondientes y a la especialización en su función policial. Cursos que se recibieron en el año 2016, es decir, que desde el 2010, en que se recibió la formación básica, transcurrieron seis años, para volver a recibir otra instrucción.

58. Es importante hacer énfasis, en la ausencia de cuidado que imprime la Secretaría de Seguridad Pública en el manejo del armamento a cargo de los oficiales de las diferentes corporaciones policiacas de su adscripción, toda vez que, para el caso en concreto, solo se

tiene que, **JUAN EDUARDO AVITIA VILLEGAS,** en un periodo de casi diez años de servicio, cursó y aprobó los dos cursos básicos iniciales y, adicionalmente, solo dos talleres de técnicas de la función policial y otro para oficial primer respondiente y procesamiento del lugar del hecho, recibidos en el año 2016, es decir, seis años después de los cursos iniciales y casi cuatro años antes de los lamentables hechos que nos ocupan.

59. Se observa la deficiencia en la capacitación recibida por **JUAN EDUARDO AVITIA VILLEGAS,** con el dicho del mismo, quien se asumió como portador oficial de dos armas, las que describió en comparecencia rendida ante personal de este Organismo el 20 de enero de 2020, en la que detalló el tipo de arma que encargó a su resguardo y, posteriormente, recibió de su entonces compañero de trabajo **VD†**, la que describe como un arma larga, un GALIL calibre .223, misma que no corresponde con el resguardo firmado por el quejoso el 01 de junio de 2019, quien recibió un fusil efectivamente GALIL I.W.W. más el calibre no corresponde con el .223 que dice haber portado, sino con un calibre 5.56 X 45 MM, mismo que si bien es similar a la vista, sus diferencias entre presión y marca de proyectiles hace la diferencia, pudiendo ser peligroso el uso indistinto de cartuchos de una calibre en el arma que no corresponde[40]. Diferenciación que, si bien no es posible hacerse a simple vista, un experto en el uso de armas sí debería de tener conocimiento de ello, y quien no sea capaz de diferenciarlo, denotó la deficiencia en cuanto a la capacitación recibida.

60. Adicionalmente, se tiene que la práctica de tiro, y con ello el ejercicio real del uso y manejo de las armas de cargo es una práctica esporádica, ya que la autoridad involucrada documentó que, **JUAN EDUARDO AVITIA VILLEGAS,** y otras 17 personas participaron en una práctica de tiro, el día 10 de julio de 2019, siendo ésta la última práctica en que el involucrado participó, es decir, 06 meses antes de los hechos en que privara de la vida a uno de sus compañeros. Única práctica documentada, por lo que se desconoce la regularidad de las mismas, siendo el parámetro los seis meses que habían transcurrido previos a los hechos que nos ocupan. Como al efecto lo informó el **INSPECTOR GENERAL ISAÍAS HERNÁNDEZ LANDEROS**, quien fuera Director de la Policía Estatal Preventiva, mediante informe recibido en este Organismo el 10 de noviembre de 2020, en donde argumentó que la capacitación de **AVITIA VILLEGAS** había sido teórico práctica, y que también tenía adestramiento y práctica de tiro. Argumentos que, como se dijo, constó solo de 390 horas de capacitación teórico práctica, seis años antes a los hechos y un solo ejercicio de práctica de tiro, seis meses previos a los lamentables hechos, en dónde falleciera **VD†**.

61. Se tiene por cierto que, la Secretaría de Seguridad Pública, no prevé de forma frecuente la práctica de tiro y el uso adecuado de las armas de cargo, con la referencia antes citadas, en concatenación con el dicho del oficial **C. FRANCISCO JOEL TORRES DE LA CRUZ,** quien al respecto manifestó tener dos años de servicio para la Policía Estatal Preventiva y haber participado solamente en una práctica de tiro, la que se realizó el año anterior a rendir declaración ante personal de este Organismo. Dijo, adicionalmente, tener conocimiento que se estaba programando una segunda práctica de tiro. Al respecto, esta Comisión sostiene que, el manejo habitual del arma es indispensable para el uso adecuado al momento de presentarse las circunstancias que conforme a la ley sea necesario su uso, además de evitar hechos fortuitos como el que nos ocupa, por ello asegura que la capacitación y práctica de tiro y manejo de armas deberá ser constante y generalizada, ya que la autoridad solo documentó la participación de 18 personas en la práctica del 10 de julio de 2019, universo que resulta ínfimo en relación con el total de elementos de las diferentes corporaciones policiacas que conforman la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas.

62. Por tal motivo, es de concluir que, en el caso que nos ocupa, se utilizó fuerza letal, para privar de la vida a **VD†**, ya que las armas de fuego[41], son consideradas como de las armas letales, que por su diseño y mecanismo ocasionan o pueden ocasionar lesiones graves y la

---

[40] Revista digital julio de 2020, consultada en https://espacioarmas.com/5-56-otan-vs-223-rem-cual-es-la-diferencia/

[41] ÓP. Cit. Artículo 3, fracción II, Las autorizadas para el uso de los miembros de las instituciones de seguridad, de conformidad con la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y su Reglamento

muerte. Uso de fuerza por impericia que redundó en una pérdida de vida huma a cargo de un funcionario encargado de hacer cumplir la ley, y con ello una ejecución arbitraria.

C) Ejecución arbitraria.

63. La ejecución arbitraria se produce cuando una autoridad pública priva deliberadamente de la vida a un ser humano, o en circunstancias que no corresponden al uso legítimo de la fuerza pública. La que, para ser legítima se rige por los principios de necesidad, legalidad, prevención, proporcionalidad y, rendición de cuentas y vigilancia. Los que se dejaron de observar, en los hechos en que perdiera la vida **VD†**, quien se encontraba en funciones de Policía, por lo que además de la responsabilidad penal del autor material, deberá de investigarse de manera exhaustiva, por parte del Órgano Interno de Control y la Comisión de Honor y Justicia de la Secretará de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas.

64. El respecto, el Protocolo Modelo para la Investigación Legal de Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias y Sumarias (Protocolo Minnesota), establece que, "[l]a calificación de ejecución arbitraria o extrajudicial debe reservarse para los casos de privación de la vida como consecuencia de homicidios perpetrados por agentes del Estado o con su apoyo o tolerancia, incluyendo igualmente los fallecimientos durante la detención o prisión como consecuencia de tortura, malos tratos o de falta de tratamiento médico o de otro tipo."[42]

65. Asimismo, el Protocolo precisa que, "toda violación de derechos humanos, la intención debe ser un elemento constitutivo de una ejecución extrajudicial o arbitraria […]".[43] Por lo que, se considera que ocurre una ejecución extrajudicial o arbitraria cuando se produce la "[m]uerte como consecuencia del uso de la fuerza por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, cuando ese uso no obedece a los criterios de necesidad, racionalidad y proporcionalidad."[44]

66. Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, "ha establecido que cuando los agentes estatales emplean la fuerza ilegítima, excesiva o desproporcionada, […] dando lugar a la pérdida de la vida, se considera una privación arbitraria de la misma."[45]

67. Además, en cuanto a la intención, "el Relator Especial de Naciones Unidas sobre Ejecuciones Extrajudiciales ha sostenido que existe intencionalidad cuando hay cierto grado de premeditación al generar una muerte, en la medida en que una decisión que se adopta por anticipado y que descarta la posibilidad de ofrecer o aceptar la oportunidad de rendirse, determina la ilegalidad de dichas operaciones. Es decir, que de las acciones emprendidas por los agentes se puede derivar que no se permitió a las personas la rendición y en su caso acciones graduales para lograr su detención, sino que por el contrario se procedió a utilizar armas letales que les ocasionaron la muerte."[46]

68. Ahora bien, en el caso de estudio, los hechos acaecieron al margen de toda normatividad previsible, y si bien no es posible concatenar la acción con una intención directa, la muerte acaeció por la conducta de un funcionario encargado de hacer cumplir la ley, y cuya investigación debe de ser exhaustiva, ya que, en este caso, la ejecución arbitraria o extrajudicial, acaeció cuando se privó de la vida a **VD†**, lo que se perpetró o ejecutó por un agente de Estado, acción que, aun sin intención debe ser motivo de análisis e investigación ya que, la muerte fue a consecuencia del uso inadecuado de la fuerza por parte de un funcionario encargado de hacer cumplir la ley.

69. El respeto al derecho a la vida, en la acepción de ejecución extrajudicial o arbitraria, lo encontramos identificado en "Los principios relativos a una eficaz prevención e investigación

---

[42] Protocolo Modelo para la Investigación Legal de Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias y Sumarias (Protocolo Minnesota), http://www.hchr.org.co/phocadownload/publicaciones/Libros/protocolo%20de%20minesota.pdf, fecha de consulta 05 de noviembre de 2020.
[43] Ídem.
[44] Ídem.
[45] CrIDH, "Caso Nadege Dorzema y Otros vs. República Dominicana, Sentencia de 24 de octubre de 2012 (Fondo, Reparaciones y Costas), de fecha 10 de enero de 2019, párr. 92.
[46] Ídem, párr. 95.

de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias"[47], que proscribe las mismas y vela porque todos los estados las tipifiquen como delitos, además en el Manual sobre la Prevención e Investigación Eficaces de las Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias o Sumarias[48] por su parte el Relator Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias y Arbitrarias, ha emitido tres mandatos, en los años 2011, 2014 y, 2017[49], en donde se ha especificado con claridad que la ejecución extrajudicial es una violación que puede consumarse, en el ejercicio del poder del cargo del agente estatal, de manera aislada, con o sin motivación política, o más grave aún, como una acción derivada de un patrón de índole institucional.

70. Usualmente se entiende que la ejecución se deriva de una acción intencional para privar arbitrariamente de la vida de una o más personas, de parte de los agentes del Estado o bien de particulares bajo su orden, complicidad o aquiescencia, sin embargo, tanto en doctrina como en alguna legislación, se aceptan diversos grados de intencionalidad cuando los responsables son miembros de los cuerpos de seguridad del Estado.

71. Así tenemos que, en el caso que nos ocupa, la ejecución arbitraria se produjo al constituirse en los hechos los elementos que la configuran, como son la privación de la vida, de manera deliberada o negligente, fuera de las circunstancias que legitiman el uso de la fuerza pública, como son la actualización de los principios de necesidad, legalidad, prevención, proporcionalidad, rendición de cuentas y vigilancia. En este caso la pérdida de la vida de **VD†**, se dio cuando él se encontraba en funciones, imputable a un compañero de trabajo, también elemento de la Policía Estatal Preventiva, en la que ambos se desempeñaban, lo que configuró el descuido o negligencia del responsable de esos hechos, quien fue sujeto a investigación penal por su responsabilidad material.

72. El otro elemento indispensable para tener que **VD†**, perdió la vida en una ejecución arbitraria, es precisamente que el uso del arma de fuego que se involucró en los hechos, no haya sido legítimo, porque para que sea legítimo el uso de armas de fuego debe de regirse por los principios de necesidad, legalidad, prevención, proporcionalidad y, rendición de cuentas y vigilancia. Como se ha sostenido no se actualizó ninguno de estos principios, pues no hubo necesidad del uso del arma de fuego, como tampoco hubo necesidad del intercambio del arma para el resguardo de un tercero, sino que se hizo un uso negligente de la misma. Dejando de observar también, los principios de legalidad, ya que ningún ordenamiento mandataba compartir o dejar en resguardo de terceros el arma de cargo; consecuentemente, al prestar o dejar encargada un arma de cargo, se dejó de observar el principio de prevención y finalmente, también el de proporcionalidad, pues no mediaba proporción alguna para ese uso negligente de su arma de cargo.

73. Consecuentemente y de conformidad con lo que al respecto contempla el Protocolo Modelo para la Investigación Legal de Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias y Sumarias la muerte de **VD†**, debe entenderse como una ejecución arbitraria o extrajudicial, ya que se le privó de la vida por la acción directa de un agente del Estado, concretamente un elemento de la Policía Estatal Preventiva, en la que si bien no se actualizó la intención como elemento constitutivo de la ejecución extrajudicial o arbitraria, al ocurrir como consecuencia del uso de la fuerza por un funcionario encargados de hacer cumplir la ley, y sin obedecer a los criterios de necesidad, racionalidad y proporcionalidad, las misma resultó arbitraria.

74. La conclusión indubitablemente es que, en el caso de estudio, los hechos acaecieron al margen de toda normatividad previsible, y si bien no es posible concatenar la acción con una intención directa, la muerte acaeció por la conducta de un funcionario encargado de hacer cumplir la ley, cuya investigación debe de ser exhaustiva, ya que en este caso la ejecución arbitraria o extrajudicial, acaeció cuando se privó de la vida a **VD†**, lo que se perpetró o ejecutó por un agente de Estado, acción que, debe ser motivo de análisis e investigación ya

[47] https://undocs.org/pdf?symbol=es/E/RES/1989/65
[48] 1991, Nueva York, https://biblioteca.iidh-jurisprudencia.ac.cr/index.php/documentos-en-espanol/prevencion-de-la-tortura/1334-manual-sobre-prevencion-e-investigacion-eficaces-de-ejecuciones-extralegales-arbitrarias-o-sumarias/file
[49] https://www.ohchr.org/SP/Issues/Executions/Pages/Resolutions.aspx

que, la muerte fue a consecuencia del uso inadecuado de la fuerza por parte de un funcionario encargado de hacer cumplir la ley.

75. Por lo que hace a la investigación se tiene que, si bien la Coordinación de Asuntos Internos de la Secretaria de Seguridad Publica, inicio procedimiento desde el 13 de enero de 2020, a instancia del entonces Secretario de Seguridad Pública, la que se inició y conoció con el número SSP/CAI/008/2020, y concluyó mediante acuerdo de auto que determina la investigación, de fecha 18 de marzo de 2020, con lo que concluyó la primera etapa del procedimiento, el que mediante oficio SSP/CAI/220/2020, se derivó al Director de la Policía Estatal Preventiva, para su prosecución. Es dable creer que el procedimiento de honor y justicia debe ser además de sancionadora, formativa que permita erradicar las conductas negligentes como la que nos ocupa.

VII. CONCLUSIONES DEL CASO.

1. Esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, reitera que el Estado mexicano, por conducto de las instituciones de seguridad pública, tiene la obligación de garantizar la seguridad y salvaguardar la vida y la integridad de las personas. Sostiene que las corporaciones policiacas, son garantes del respeto de lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales suscritos y ratificados por México y en las leyes y reglamentos aplicables. Por tal motivo, el Estado Mexicano ha conferido a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, el uso legítimo de la fuerza y con ello de las armas de fuego, por tanto, el conocimiento de las armas, la capacitación en su uso, y el adiestramiento continúo en su manejo, deberá garantizar que se utilicen solo en los casos que contempla la legislación de la materia y que por ningún motivo la falta de pericia, capacitación y adiestramiento, sean motivo de pérdidas de vidas humanas.

2. En la presente Recomendación, se comprobó que existieron violaciones a los derechos humanos de **VD†**, en calidad de víctima directa, así como de sus menores hijos, **VI1** y **VI2**; de quien en vida fuera su esposa la **VI3**; sus señores padres, **VI4** y **VI5,** así como de su hermano **VI6**. Al primero de los cuales se le violentó el derecho a la vida en su modalidad a no ser privado de la misma, en relación con el uso inadecuado de la fuerza pública, que motivó su ejecución arbitraria. En tanto que las víctimas indirectas sufrieron la pérdida de un miembro de su familia.

3. De estos hechos, es responsable directo **JUAN EDUARDO AVITIA VILLEGAS**, en lo particular, por la impericia que se demostró en el uso de armas de fuego y la falta de responsabilidad al solicitar a otra persona que resguardara su arma de cargo.

4. Es responsabilidad institucional la ausencia de capacitación y control de la Secretaría de Seguridad Pública, para con el personal operativo que tiene bajo su responsabilidad el uso, manejo y portación de armas de fuego, quien como se evidenció ofrece una capacitación ínfima, provocando como en este caso ocurrió, la lamentable pérdida de una vida humana y la posibilidad latente de la repetición de actos de esta naturaleza.

VIII. CALIDAD DE VÍCTIMAS INDIRECTAS.

1. La Corte Interamericana ha definido qué se entiende por “víctima” en general y qué se entiende por “víctima” stricto sensu dentro de un proceso contencioso. La noción de “víctima” bajo derecho internacional refiere a la parte lesionada. De conformidad con reglas generales de la Responsabilidad Internacional de los Estados, la parte lesionada es aquella *“cuyo derecho individual ha sido denegado o dañado por el acto ilegal internacional o que ha sido de otra manera particularmente afectado por dicho acto”.* En el área de la protección internacional de derechos humanos, la parte lesionada es el individuo cuyos derechos han sido violados, es decir la parte cuyos derechos han sido conculcados generándosele un daño. A menudo también se le refiere como la “parte agraviada”. El Reglamento de la Corte Interamericana define el término “víctima” de la siguiente manera: “*significa la persona cuyos derechos han sido violados de acuerdo a la sentencia proferida por la Corte”.* Es decir,

"víctima" es aquella cuyos derechos ya han sido determinados por la Corte habiendo establecido violaciones en su detrimento.

2. Luego, la jurisprudencia de la Corte ha expandido *rationae personae*[50] el reconocimiento de la condición de "víctima" a personas que en su jurisprudencia inicial no eran consideradas como tales. Por ejemplo, en el caso Villagrán Morales y Otros, la Corte reconoció la condición de víctimas con base a derecho propio, de los familiares de los menores asesinados. La Corte reconoció en ese sentido que los familiares de dichos menores torturados y asesinados también habían sufrido en sí, violaciones al artículo 5 de la Convención.

3. En el caso Villagrán Morales y Otros, la Corte Interamericana falló de la siguiente manera: "La Comisión señaló, en sus alegatos finales escritos, que las circunstancias de la muerte de las víctimas, así como la falta de actuación del Estado, habían provocado en los familiares de las mismas "angustias y también considerable temor"[51]. "La Corte debe destacar entre las conductas de los agentes estatales que intervinieron en los hechos del caso y que produjeron un impacto sobre sus familiares, la correspondiente al tratamiento que se dio a los cuerpos de los jóvenes cuyos cadáveres aparecieron en los Bosques de San Nicolás, […]. Estas personas no sólo fueron víctimas de la violencia extrema correspondiente a su eliminación física, sino que, además, sus cuerpos fueron abandonados en un paraje deshabitado, quedaron expuestos a las inclemencias del tiempo y a la acción de los animales y hubieran podido permanecer así durante varios días, si no hubieran sido encontrados fortuitamente. En el presente caso, es evidente que el tratamiento que se dio a los restos de las víctimas, que eran sagrados para sus deudos, y en particular, para sus madres, constituyó para éstas un trato cruel e inhumano."[52]

4. En el caso Bámaca Velásquez[53], la noción ampliada de *rationae personae* fue aplicada a la viuda del desaparecido. En dicha decisión, el juez Cançado Trindade señaló con referencia a la expansión de la noción de "víctima" lo siguiente: *"…Así, la Corte Interamericana ha establecido correctamente que, en circunstancias como las del presente caso Bámaca Velásquez, las víctimas son tanto la persona desaparecida como sus familiares inmediatos."*[54]

5. También la Corte Interamericana ha estimado que se puede declarar la violación del derecho a la integridad psíquica y moral de familiares directos de víctimas de ciertas violaciones de derechos humanos aplicando una presunción iuris tantum respecto de madres y padres, hijas e hijos, esposos y esposas, y compañeros y compañeras permanentes (en adelante "familiares directos"), siempre que ello responda a las circunstancias particulares en el caso. Respecto de tales familiares directos, corresponde al Estado desvirtuar dicha presunción[55].

6. En el marco legal nacional, la Ley General de Víctimas conceptualiza en su artículo 4, a las víctimas directas e indirectas, entre otras, de la siguiente manera: "…víctimas directas aquellas personas físicas que hayan sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional, o en general cualquiera puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte. Son víctimas indirectas los familiares o aquellas personas físicas a cargo de la víctima directa que tengan una relación inmediata con ella."

7. En el estado de Zacatecas, la Ley de Atención a Víctimas establece en el ordinal 4°, párrafos segundo y tercero: "Son víctimas indirectas los familiares o aquellas personas físicas a cargo de la víctima directa que tengan una relación inmediata con ella. Para este efecto se consideran víctimas indirectas, entre otros, los siguientes: I. El cónyuge, la

---

[50] Por razón de la persona.
[51] Villagrán Morales et al case, Series C: No 63., Sentencia del 19 de noviembre de 1999, óp. Cid. párr. 171
[52] Óp. Cit., párr. 174.
[53] Caso Bámaca Velásquez, Series C No 70. Sentencia sobre Fondo, Sentencia de 25 de noviembre de 2000
[54] Ídem. Párr. 38.
[55] Cfr. Caso Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia, párr. 119, y Caso Kawas Fernández Vs. Honduras, párr. 128.

concubina o el concubinario; II. Las hijas e hijos de la Víctima; III. Los Padres de la Víctima, y IV. Los dependientes económicos de la Víctima.”

8. En este caso, si bien la causa penal […] que se siguió por mismos hechos, en contra de **JUAN EDUARDO AVITIA VILLEGAS**, concluyó con una forma anticipada del proceso, conocida como procedimiento abreviado, en el que el inculpado reconoce estar debidamente informado de su derecho a un juicio oral y de los alcances del procedimiento abreviado; renuncia a su derecho al juicio oral; consiente el procedimiento abreviado; admite su responsabilidad por el delito que se le imputa y acepta ser sentenciado con base en los medios de convicción que exponga el Ministerio Público al formular la acusación. Forma anticipada de concluir el proceso que se celebró el 16 de diciembre de 2020, y en donde el juez fijó el monto de la reparación del daño, a razón de seiscientos veintitrés mil cuatrocientos veintitrés pesos con veinte centavos, ($623, 423.20 MN), lo que cubre solamente la responsabilidad personal, ante el acto de impericia, no así la responsabilidad institucional de la corporación policíaca quien dejó de capacitar adecuadamente a su personal, lo que provocó el uso negligente de un arma de fuego.

9. Así de conformidad con el artículo 4°, párrafo segundo, de la Ley de Víctimas del Estado de Zacatecas, establece que, cuando como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, se reconozca una víctima directa, se considerará como víctima indirecta a los familiares o aquellas personas físicas a cargo de la víctima directa, que tengan una relación inmediata con ella; en ese entendido, considera como tal, al cónyuge, la concubina o el concubinario, las hijas e hijos de la víctima, los padres y los dependientes económicos de la víctima.

Por los razonamientos anteriores se puede determinar las siguientes víctimas directas e indirectas, así como los vínculos que existen entre ellas.

- Víctima directa: (**VD)**

VD†.

- Víctimas indirectas:

a) **MENOR VI1**, hijo;
b) **MENOR VI2**, hija;
c) **C. VI3**, esposa;
d) **C. VI4,** madre;
e) **C. VI5,** padre; y
f) **C. VI6,** hermano.

IX. REPARACIONES

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 51 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, al acreditarse una violación a los derechos humanos, atribuible a un servidor público estatal, la resolución formulada al respecto debe incluir las medidas necesarias para lograr la efectiva restitución de las personas afectadas en sus derechos.

2. Así, en un respeto irrestricto del Estado de Derecho, las personas gozarán de la garantía de que en caso de ser objeto de violación a sus derechos humanos, podrán reclamar que el o los responsables de dicha vulneración sean sancionados, pues el Estado tiene la posición de garante de sus derechos y, por lo tanto, según lo ha dispuesto la Suprema Corte de Justicia de la Nación, “Las víctimas de violación a los derechos humanos a sus familiares, tienen derecho a la reparación adecuada del daño sufrido. Lo cual debe concretarse a través de medidas individuales tendientes a restituir, indemnizar y rehabilitar a la víctima, así como de medidas de satisfacción de alcance general y garantías de no repetición, mediante los procedimientos previstos legalmente para esos efectos, lo cual no es una concesión graciosa, sino el cumplimiento de una obligación jurídica. Lo anterior deriva tanto del régimen

previsto constitucionalmente como de los internacionales, los cuales se manifiestan claramente en el sentido de que es un derecho efectivo de las personas agraviadas a nivel fundamental obtener una reparación proporcional a la gravedad de las violaciones y al daño sufrido.

3. El deber de reparación por violaciones a los derechos humanos, a nivel internacional lo encontramos dispuesto tanto en el sistema universal, como regional de protección a los derechos humanos. En el ámbito universal, se encuentra previsto en los "*Principios y directrices básicos sobre el derecho a las víctimas de violaciones manifiestas a las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves al derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones",* adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 2005, donde se dispone que las violaciones de derechos humanos deben contemplar, de forma apropiada y proporcional a la gravedad de ésta, una reparación plena y efectiva en las formas siguientes: indemnización, restitución, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, lo cual a su vez es también contemplado por la Ley General de Víctimas, en sus artículos 1, último párrafo, 7, fracción I y II, y particularmente en el texto legal del artículo 26, que establece que "*Las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera oportuna, plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva por el daño que han sufrido como consecuencia del delito o hecho victimizante que las ha afectado o de las violaciones de derechos humanos que han sufrido, comprendiendo medidas de no repetición",* además por lo previsto en el artículo 27 del mismo ordenamiento legal. Por ello, resulta particularmente importante la ejecución de las medidas de reparación por parte del Estado, dirigidas a la no repetición en el Estado de Zacatecas de hechos similares a los ocurridos en el presente caso.

4. En el sistema regional, la Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 63.1 establece que: "cuando decida que hubo violación a un derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá, si ello fuera procedente, que se reparen las Consecuencias de la medida o situación que se ha configurado la violación a estos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada".

5. Por su parte, La CrlDH, ha establecido que "*las reparaciones, como el término lo indica, consisten en las medidas que tienden a hacer desaparecer los efectos de las violaciones cometidas. Su naturaleza y su monto dependen del daño ocasionado en los planos tanto material como inmaterial".*

6. Este doble alcance de la norma reparatoria, ha incidido cada vez con mayor frecuencia en el desarrollo de la jurisprudencia de la CrlDH, dando lugar a una arquitectura reparatoria que tendrá como objetivo, no sólo borrar las huellas que en la víctima produjo el actuar del Estado, sino también evitar que ese tipo de hechos se repitan.

7. Por lo que hace a este derecho, el artículo 51 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, dispone que, al acreditarse una violación a los derechos humanos atribuible a un servidor público estatal, la resolución formulada al respecto debe incluir las medidas que procedan para lograr la efectiva restitución de las personas afectadas en sus derechos.

Modalidades de la reparación del daño. La reparación del daño comprende diversas modalidades en las que se puede materializar:

A) De la indemnización.

1. La indemnización es una medida compensatoria que busca reparar los perjuicios económicamente evaluables que sean consecuencia de las violaciones a derechos humanos, ente los que se incluyen: el daño físico o mental; la pérdida de oportunidades, en particular las de empleo, educación y prestaciones sociales; los daños materiales y la

pérdida de ingresos, incluido el lucro cesante; los perjuicios morales; los gastos de asistencia jurídica o de expertos, medicamentos y servicios médicos, psicológicos y sociales[56].

2. En el caso motivo de este documento recomendatorio, es procedente el pago de una indemnización, tanto por los daños económicos, que produjo la pérdida del jefe de familia y proveedor de la misma, como los gastos generados para su inhumación, así como por los daños emocionales que se les causaron a los familiares de **VD†**, por lo que, este Organismo, solicita a la Comisión Ejecutiva de Atención Integral a Víctimas del Estado, realice la inscripción de las siguientes personas**: VI1, VI2, VI3, VI4, VI5** y **VI6,** en el Registro Estatal de Víctimas, a fin de que tengan acceso a los servicios y al Fondo de Atención previsto en dicha Ley.

B) De la rehabilitación.

1. Las medidas de rehabilitación buscan reducir los padecimientos físicos y psicológicos de las víctimas, a través del otorgamiento de servicios de atención médica, psicológica, jurídica y social que éstas requieran[57].

2. En atención a que, en el caso en concreto se advierte que los familiares estuvieron expuestos a un evento emocional traumático, por lo que no se descarta un daño psicológico producto de los hechos de la indebida actuación de los servidores públicos involucrados, en consecuencia, se considera necesario se brinde atención psicológica especializada en tanatología a las siguientes personas: **VI1, VI2, VI3, VI4, VI5** y **VI6,** para enfrentar consecuencias psíquicas que pudiera tener, a raíz del homicidio cometido en perjuicio de **VD†**.

C) De las medidas de satisfacción.

1. Respecto a este concepto, de conformidad con lo establecido por los Principios sobre el derecho a obtener a reparaciones, ésta debe incluir, cuando sea el caso, la totalidad o parte de las medidas siguientes: a) medidas eficaces para conseguir que no se continúe con las violaciones; b) la verificación de los hechos y la revelación pública y completa de la verdad; c) una declaración oficial o decisión oficial que restablezca la dignidad, la reputación y los derechos de la víctima; d) una disculpa pública; y e) la aplicación de sanciones judiciales o administrativas a los responsables de las violaciones.

2. En caso concreto, la aceptación de esta Recomendación, deberá traer consigo aparejado el mejoramiento continuo en materia de capacitación y adiestramiento en el manejo de armas de fuego. Así como la responsabilidad penal, y administrativa a que se haya hecho acreedor **JUAN EDUARDO AVITIA VILLEGAS,** quien por lo que hace a la responsabilidad penal ya enfrentó la causa penal […] y cuenta ya con una sentencia condenatoria, dictada mediante procedimiento abreviado, restando solo imponer sanción administrativa, por lo que la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública, deberá también concluir el procedimiento.

D) Garantías de no repetición.

1. Las garantías de no repetición, son aquellas que se adaptan con el fin de evitar que las víctimas vuelvan a hacer objeto de violaciones a sus derechos humanos y, toda vez que los Derechos Humanos son universales, contribuyen a prevenir o evitar la repetición de actos de su misma naturaleza.

---

[56]Numeral 20 de los Principios y Directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, Asamblea General de las Naciones Unidas, 16 de diciembre de 2005.
[57]Ibid., Numeral 21.

2. Este Organismo estima que necesario que, la Secretaría de Seguridad Pública, implemente estrategias que garanticen la capacitación permanente y profesionalización constante de los elementos policiacos adscritos a ésta. Particularmente, resulta indispensable, que se aborden temas como el derecho a la vida, en relación al uso adecuado de la fuerza pública y al uso de armas de fuego, para que el personal de dicha Secretaría garantice la seguridad e integridad física, psíquica o moral de sus integrantes y de las personas con las que, por motivo de su función, tengan contacto. De manera que, sus actuaciones, sean acordes a los principios de absoluta necesidad, legalidad, prevención, proporcionalidad, rendición de cuentas y vigilancia, así como demás disposiciones previstas en la Ley Nacional Sobre el Uso de la Fuerza.

3. Asimismo, esta Comisión considera trascendente fortalecer las capacidades institucionales mediante capacitación sobre los principios de protección a los derechos humanos y sobre los límites a los que deben estar sometidas, a fin de evitar que hechos como los sufridos por el agraviado se vuelvan a presentar.

X. RECOMENDACIONES.

PRIMERA. En el plazo máximo de un mes, contado a partir de la notificación de la presente Recomendación, se inscriba en el Registro Estatal de Víctimas a **VD†**, en calidad de víctima directa de violaciones a derechos humanos, así como a las **VI1, VI2, VI3, VI4, VI5** y **VI6,** en calidad de víctimas indirectas, para que dentro del plazo máximo de un año, contado a partir de la notificación de la presente Recomendación, se garantice su acceso oportuno al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, previsto en la Ley de Atención a Víctimas del Estado de Zacatecas, a efecto de que se realice la indemnización correspondiente; debiendo remitir a este Organismo protector de Derechos Humanos, las constancias con que acredite su cumplimiento.

SEGUNDA. En el plazo máximo de un mes, contado a partir de la notificación de esta Recomendación, se valore y determine proporcionar a las víctimas indirectas **VI1, VI2, VI3, VI4, VI5** y **VI6**, la atención psicológica necesaria, y de ser el caso, se les otorgue la terapia que requieran, derivado del evento relacionado con la pérdida de la vida de **VD†**. Debiendo garantizar que dichas atenciones sean gratuitas. Asimismo, se deberán remitir a este Organismo las constancias que acrediten su cumplimiento.

TERCERA. En un plazo máximo de un mes, contado a partir de la aceptación de la presente Recomendación, se documente el inicio el procedimiento administrativo sancionador ante la Comisión de Honor y Justicia, de la Secretaría de Seguridad Pública, en contra del señor **JUAN EDUARDO AVITIA VILLEGAS.**

CUARTA. En un plazo máximo de un mes, contado a partir de la aceptación de la presente Recomendación, se implemente en la Policía Estatal Preventiva, y en todas aquellas que conforman el Sistema Estatal de Seguridad Pública, una serie de capacitaciones en temas de derechos humanos, particularmente en el derecho a la vida, el uso de armas de fuego, el uso adecuado de la fuerza pública y los principios que la rigen como son los de absoluta necesidad, legalidad, prevención, proporcionalidad, rendición de cuentas y vigilancia, así como demás disposiciones previstas en la Ley Nacional Sobre el Uso de la Fuerza y, documentar a esta Comisión su cumplimiento.

QUINTA. En un plazo máximo de tres meses, contados a partir de la aceptación de la presente Recomendación, se implementen estrategias que garanticen la capacitación permanente y profesionalización constante de los elementos policiacos adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública. Particularmente, resulta indispensable, que se aborden temas como el derecho a la vida, en relación al uso adecuado de la fuerza pública y al uso

de armas de fuego, para que el personal de dicha Secretaría garantice la seguridad e integridad física, psíquica o moral de sus integrantes y de las personas con las que, por motivo de su función, tengan contacto. De manera que, sus actuaciones, sean acordes a los principios de absoluta necesidad, legalidad, prevención, proporcionalidad, rendición de cuentas y vigilancia, así como demás disposiciones previstas en la Ley Nacional Sobre el Uso de la Fuerza.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 53, párrafo segundo de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, se hace del conocimiento de la autoridad a la que va dirigida esta Recomendación, que dispone de un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente en que ésta se le notifique, para que manifieste si la acepta o no, en el entendido de que, de no aceptarla, su respuesta se hará del conocimiento de la opinión pública. En caso de que la acepte, se le notifica que dispone de un plazo de 15 días, contados a partir del vencimiento del término del que disponía para responder sobre la aceptación, a fin de enviar las pruebas de su cumplimiento.

Por último, hágasele saber a los familiares de la parte quejosa que, de conformidad con el artículo 61 de la Ley de este Organismo, dispone de 30 días naturales, computados a partir de la fecha de notificación del presente documento, para que en caso de que exista inconformidad con la misma, interponga el recurso de impugnación correspondiente ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Así lo determina y firma

DRA. EN D. MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOS
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE ZACATECAS

Expediente: CDHEZ/041/2020 y acumulados CDHEZ/044/2020, CDHEZ/048/2020 y CDHEZ/315/2020.

Personas quejosas: CC. Q1, Q2, y J. Q3.

Personas agraviadas: CC. Q1, Q2, Q3, y otros.

Autoridad responsable:

I. L.A.E. Francisco Javier Martínez Muñoz, otrora Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas y,
II. Mtro. Marco Vinicio Flores Guerrero, en su calidad de Director General del ISSSTEZAC en funciones.

Derechos humanos violentados:

I. Derecho al trabajo, en su modalidad de derecho a las prestaciones de Seguridad Social;
II. Derecho de las personas adultas mayores, en relación con el derecho a la no discriminación.

Zacatecas, Zac., a 06 de agosto de 2021, una vez concluida la investigación de los hechos que motivaron el expediente de queja CDHEZ/041/2020, al que se acumularon los respectivos CDHEZ/044/2020, CDHEZ/048/2020 y CDHEZ/315/2020, y analizado el proyecto presentado por la Tercera Visitaduría, la suscrita aprobé, de conformidad con los artículos 4, 8 fracción VIII, 17 fracción V, 37, 51, 53 y 56 de la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, en relación con lo dispuesto por los numerales 27, fracción VIII, 40, 161, fracción X, 166, 167, 168, 169, 170, 171 y 173, del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, la **Recomendación 39/2021** que se dirige a la autoridades siguientes:

INTEGRANTES DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE ZACATECAS:[1].

I. CONSEJEROS REPRESENTANTES DE LOS ENTES PÚBLICOS:

1. **DR. RICARDO OLIVARES SÁNCHEZ**, Secretario de Finanzas del Estado de Zacatecas;
2. **LIC. JUAN ANTONIO RUIZ GARCÍA**, Secretario de Administración del Estado de Zacatecas;
3. **ING. JUAN SÁNCHEZ LEGASPI,** Encargado de la Coordinación Estatal de Planeación e,
4. **ING. CARLOS FERNANDO BÁRCENAS POUS**, Secretario de Economía del Estado de Zacatecas.

II. CONSEJEROS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES:

1. **LIC. ISRAEL CHÁVEZ LEANDRO**, Secretario General del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado, Municipios y Organismos Paraestatales;

---

[1]. LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE ZACATECAS
Artículo 105. **Órganos de gobierno**
El gobierno y la administración del ISSSTEZAC estará a cargo de:
I. La Junta Directiva; […]
Artículo 106. **Integración de la Junta Directiva**
El órgano máximo de gobierno del ISSSTEZAC será la Junta Directiva, la que se integrará por cuatro Consejeros representantes de los entes públicos y cuatro Consejeros representantes de los trabajadores, con derecho a voz y voto. […]

2. **MAESTRO ÓSCAR CASTRUITA HERNÁNDEZ**, Secretario General de la Sección 58 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación;
3. **MAESTRO. HÉCTOR FERNÁNDEZ**, Secretario del Sindicato Independiente de Trabajadores de Telesecundaria en el Estado de Zacatecas; y
4. **ING. GERARDO GARCÍA MURILLO,** Secretario General del Sindicato Único del Personal Docente y Administrativo del Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas.

RESULTANDO:

I. DE LA CONFIDENCIALIDAD

1. De conformidad con los artículos 6°, apartado A, fracción II y 16, apartado A, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 23 y 85 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, los datos personales de los peticionarios y los agraviados que así lo soliciten, relacionadas con esta resolución, permanecerán confidenciales, ya que éstos no son públicos.

II. RELATORÍA DE LOS HECHOS Y OBJETO DE LA CONTROVERSIA.

1. El 24 de enero de 2020, el **C. Q1,** el día 27 de enero de 2020, la **C. Q2,** y el día 29 de enero de 2020, el **C. Q3,** presentaron queja a favor de los **CC. A1, A2, A3,** y demás coagraviados, todos pensionados y jubilados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTEZAC), en contra del personal adscrito a dicho Instituto, por actos presuntamente violatorios de los derechos humanos, por sí y en favor de sus representados, de conformidad con los artículos 30, 31 y 32 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas.

Por razón de turno, el 27 de enero de 2020, la queja se remitió a la Tercera Visitaduría, bajo el número de expediente citado al rubro, a efecto de formular el acuerdo de calificación de ésta, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 123 y 124 del Reglamento de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas.

El 28 de enero de 2020, la queja se calificó como presunta violación a los derechos humanos de los **CC. Q1, Q2, Q3, A1, A2, A3,** y demás coagraviados pensionados y jubilados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTEZAC), de conformidad con lo establecido por el artículo 124, fracción I, del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas.

El 06 de febrero de 2020, se dictó acuerdo de acumulación de los expedientes de queja CDHEZ/044/2020, y CDHEZ/048/2020 al CDHEZ/041/2020, de conformidad con lo establecido en el artículo 117, fracción I del Reglamento de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, bajo los argumentos ahí vertidos.

El 09 de julio de 2020, el **C. Q1,** presentó queja en contra del **MAESTRO MARCO VINICIO FLORES GUERRERO,** Director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la que se integró con el número CDHEZ/315/2020.

El 18 de mayo de 2021, el expediente de queja CDHEZ/315/2020, con fundamento en el artículo 117, fracción I del Reglamento de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, se acumuló al expediente de queja CDHEZ/041/2020.

2. Los hechos materia de la queja consistieron en lo siguiente:
Las personas quejosas y sus representados son ex trabajadores al servicio del Estado de Zacatecas, pensionados por parte del ISSSTEZAC, quienes reciben el depósito de su pensión de manera mensual, los días 15 de cada mes. Además de recibir otras prestaciones como lo es el concepto de aguinaldo, el que se les deposita en dos partes, la primera es en diciembre y la segunda el día 15 de enero. El motivo de su queja es por el retraso del depósito de algunos meses y la parte de aguinaldo a recibir el día 15 de enero de 2020, la

que aseguran no se depositó en tiempo. Retraso que les afecta en su economía familiar. Finalmente solicitaron que se realice una auditoría al ISSSTEZAC.

Finalmente, el **C. Q1** presentó queja, en contra del **MAESTRO MARCO VINICIO FLORES GUERRERO,** Director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, asegurando que éste violenta los derechos de los pensionados y jubilados, ya que mediante información difundida en la prensa local, aseguró que parte del problema financiero del Instituto obedece a algunas pensiones elevadas, y a que se les dan prestaciones no contempladas en la ley, las que considera quitar, con lo que les ha causado estrés, las notas que aportó se difundieron en el periódico Página 24, en su apartado digital, del 20 de febrero de 2020; en el rotativo estatal El Sol de Zacatecas, del 15 de junio de 2020 y, en el periódico Imagen, el 16 de mayo de 2020, así como en prensa digital, las que el quejoso aseguró causan estrés en el total de pensionados y jubilados el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas.

3. Las autoridades involucradas rindieron los informes correspondientes:

a) El 05 de febrero de 2020, los **CC. L.A.E. FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ MUÑOZ,** entonces Director General; el **ING. ALEJANDRO ARGÜELLES ARELLANO,** Director de Administración y Finanzas; la **DRA. MARTHA ISABEL SAUCEDO ENCINA,** Subdirectora de Pensiones, rinden informe y hacen llegar el de la **LIC. ESTHER CONTRERAS CHÁVEZ,** Directora de Prestaciones Económicas y Sociales, todos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas.
b) El 18 de febrero de 2020, los **CC. L.C. ADOLFO DÁVILA JR. HERNÁNDEZ,** Director de Administración y Finanzas y la **DRA. MARTHA ISABEL SAUCEDO ENCINA,** Subdirectora de Pensiones, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, remitieron el informe de autoridad.
c) El 27 de febrero de 2020, el **MTRO. MARCO VINICIO FLORES GUERRERO,** Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, remitió informe.
d) El 26 de marzo de 2020, el **MTRO. MARCO VINICIO FLORES GUERRERO,** Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, rindió ampliación de informe.
e) El 11 de junio de 2020, el **MTRO. MARCO VINICIO FLORES GUERRERO,** Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, rindió informe.
f) El 26 de junio de 2020, el **MTRO. MARCO VINICIO FLORES GUERRERO,** Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas.
g) El 26 de agosto de 2020, el **MTRO. MARCO VINICIO FLORES GUERRERO,** Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas.
h) El 28 de agosto de 2020, el **L.C. RAÚL BRITO BERUMEN,** Auditor Superior del Estado.

III. COMPETENCIA.

1. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas es competente, en términos de los artículos 1º, 4º, 6º, 8º fracción VII, inciso A) y 31 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, en relación con los numerales 15, 22 y 23 de su Reglamento Interno, en razón de que la queja se promueve en contra de servidores públicos del Instituto de Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, organismo público descentralizado, de Gobierno del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propios[2].

[2] Cfr. Artículo 6 de la LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE ZACATECAS. Ley publicada en el Suplemento del Periódico Oficial del Estado de Zacatecas, el sábado 21 de marzo del 2015.

2. De conformidad con los artículos 55 y 56 del Reglamento Interior de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, este Organismo advierte que en los hechos se puede presumir la violación de los derechos humanos de los **CC. Q1, Q2, Q3, A1, A2, A3,** y otros, todos derechohabientes pensionados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTEZAC), y la probable responsabilidad por parte de los servidores públicos señalados.

3. Esta Comisión presumió la violación de los siguientes derechos:

a) Derecho al trabajo, en su modalidad de derecho a las prestaciones de Seguridad Social.
b) Derecho de las personas adultas mayores, en relación con el derecho a la no discriminación.

IV. PROCEDIMIENTO ANTE LA COMISIÓN.

Con la finalidad de documentar las presuntas omisiones en la investigación inicial de las violaciones a derechos humanos, así como para determinar la existencia o no de responsabilidad por parte de los servidores públicos señalados, este Organismo realizó entrevistas a las personas relacionadas con los hechos; se recabaron comparecencias de personal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas; se solicitaron informes a las autoridades señaladas como responsables y se realizó dictamen psicológico forense.

V. PRUEBAS.

Con base en lo estipulado en los artículos 48 y 49 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, en relación con los numerales 150, 151, 152, 153 y 154 del Reglamento Interior de este Organismo, durante el procedimiento realizado por esta Institución se recabaron los elementos probatorios documentales, remitidos tanto por la parte agraviada como por las autoridades señaladas como responsables, así como documentación, dictámenes e inspecciones necesarios para emitir la resolución correspondiente.

VI. SOBRE LOS DERECHOS VULNERADOS.

A) Derecho al trabajo, relación con el derecho a las prestaciones de seguridad social.

1. El derecho al trabajo digno, útil, libremente escogido o aceptado, debe entenderse como el derecho humano que consagra la capacidad de elegir o aceptar libremente la realización de una actividad laboral; en ese sentido, dicha formulación normativa, trae implícita la prohibición de exigir o forzar 8a cualquier individuo a realizarla, si éste no ha manifestado su voluntad para ello. Esta prerrogativa comprende el derecho a recibir una contraprestación económica que le permita obtener satisfactores necesarios para realizar un plan de vida digno, para sí y su familia.[3] Derecho que se relaciona íntimamente con el derecho a recibir prestaciones de seguridad.

2. Como derecho fundamental, el derecho al trabajo constituye una parte esencial para la realización de otros derechos humanos, reconocido en diversos instrumentos del sistema universal de protección de derechos humanos. Es por ello que, el Derecho al Trabajo está establecido en la Declaración Universal de Derechos Humanos[4] y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales[5].

---

[3] Soberanes, José Luis (Coord.) Manual para la Calificación de Hechos Violatorios de los Derechos Humanos, Comisión Nacional de los Derechos Humanos-Porrúa, 2008, p. 321

[4] Artículo 23. 1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo...

[5] Artículo 6.

3. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, a través de su artículo 6, establece que el derecho de trabajo es esencial para la realización de otros derechos humanos y constituye una parte inseparable e inherente de la dignidad humana. Es innegable que, toda persona tiene derecho a trabajar para poder vivir con dignidad ya que, el derecho al trabajo sirve, al mismo tiempo, a la supervivencia del individuo y de su familia y contribuye también, en tanto que el trabajo es libremente escogido o aceptado, en su plena realización y reconocimiento en el seno de la comunidad. La Organización Internacional del Trabajo, subraya la importancia del empleo productivo en toda la sociedad, no solo por los recursos que crea, sino como parte de los ingresos que proporciona a los trabajadores, quienes además de cumplir con un papel social de utilidad, les crea un sentimiento de satisfacción personal[6].

4. Como derecho deseable, en materia del trabajo, en las administraciones públicas, se tiene el convenio 151, Convenio sobre las relaciones de trabajo en la administración pública, adoptado por la Organización Internacional del Trabajo, en 1978, cuya entrada en vigor, es para los países ratificantes, fue desde 1981. Mismo que, lamentablemente el Estado Mexicano no ha ratificado, de ahí que se tenga sólo como un mero criterio orientador. Dicho convenio en su artículo 6º contempla las facilidades que deben concederse a las Organizaciones de Empleados Públicos, tales como: permitirles el desempeño rápido y eficaz de sus funciones durante sus horas de trabajo o fuera de ellas; las cuales no deberá perjudicar el funcionamiento eficaz de la administración o servicio interesado, ni la naturaleza y el alcance de éstas[7]. En este sentido, la Organización Internacional del Trabajo, como responsable de velar por los derechos de las personas trabajadoras, y de que el empleo se realice en condiciones de dignidad, considera oportuno que los procedimientos para la determinación de las condiciones de empleo en las administraciones públicas sea adoptando medidas adecuadas a las condiciones nacionales, para estimular y fomentar el pleno desarrollo y utilización de procedimientos de negociación entre las autoridades públicas competentes y las organizaciones de empleados públicos, acerca de las condiciones de empleo, o de cualesquiera otros métodos que permitan a los representantes de los empleados públicos participar en la determinación de dichas condiciones.[8]

5. Los derechos humanos, como prerrogativas universales, se contemplan en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que se reconoce que, todas las personas en el territorio mexicano, gozarán de los derechos humanos y de sus garantías establecidas en el mismo precepto legal y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. Asimismo, conforme a lo establecido en el tercer párrafo del mismo artículo, las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar que todos los individuos ejerzan libre y plenamente todos los derechos y libertades reconocidos en nuestra constitución y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte[9]. Para dar cumplimiento a estos preceptos constitucionales, las autoridades de los tres órdenes de gobierno deben sujetarse a las exigencias que marca la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como a las leyes que de ella se derivan. De igual forma, deben apegarse a lo establecido en los instrumentos internacionales de los cuales el Estado Mexicano forma parte.

6. Reconocida la universalidad de todos los derechos, tenemos que, en el artículo 5°, del ordenamiento legal antes citado, se establece el derecho de toda persona a dedicarse a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siempre y cuando estos sean lícitos; luego, en el numeral 123, primer párrafo, establece la Carta Magna que, toda persona, tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Lo anterior, sin perder de vista que el artículo 1°, impone a todas las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias, la obligación

---

1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho a trabajar que comprende el derecho de toda persona de tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado, y tomarán medidas adecuadas para garantizar este derecho.

[6] Cfr. Preámbulo de Acuerdo 186 de la Organización Internacional del Trabajo. Consultada en abril de 019, https://www.ilo.org/dyn/normlex/f?p=NORMLEXPUB:12100::NO::P12100 ILO CODE:C168

[7] Cfr. Artículo 6 del, C 151, Convenio Sobre las Relaciones de Trabajo en la Administración Pública, 1978 (núm.151), consultado el día 25 de marzo de 2020 en la página https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C151

[8] Cfr. Artículo 7, Op. Cit.

[9] Artículo 1°, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, así como los deberes de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. Por ende, el Estado está obligado a tutelar los derechos humanos de naturaleza laboral. Tutela que se realiza a través de diversos órganos Constitucionales[10], creados para tales efectos, como los son a nivel materialmente jurisdiccional, las Juntas y Tribunales de Conciliación y Arbitraje, tanto a nivel federal como estatal, y a nivel administrativo con las Procuradurías de la Defensa del Trabajo.

7. Por su parte, el derecho a la seguridad social, vinculado al derecho al trabajo, se encuentra tutelado en el marco de la protección Universal de los Derechos Humanos, al estipularse en el artículo 22 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, donde textualmente se establece: “toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad”, y se contempla también en el artículo 9 del Pacto de Derechos Económicos Sociales y Culturales.

8. Por su parte, en el Sistema Interamericano, del cual forma parte México, señala en el artículo 1° de la Convención Americana de Derechos Humanos que, los Estados Parte, se comprometen a respetar los derechos y libertades de todas las personas, así como a garantizar su libre y pleno ejercicio, sin discriminación alguna, de ahí la obligación de respeto de los derechos humanos. Estas obligaciones generales de respeto y garantía, vinculantes para el Estado, con respecto a toda persona, implican para este caso concreto un mayor nivel de compromiso, al tratarse de personas en adultas mayores en riesgo o vulnerabilidad.

9. El sistema americano de protección de los derechos humanos, contempla el derecho a la seguridad social también en el numeral XVI, de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; en el artículo 9 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (“Protocolo San Salvador”) y en el Convenio 102 sobre la seguridad social (norma mínima) de 1952 de la OIT señalan que toda persona, como integrante de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, cuyo fin es la protección contra las consecuencias de la desocupación, de la vejez y de la incapacidad que le imposibilite física o mentalmente obtener medios de subsistencia.

10. Para dar el cumplimiento de los compromisos relacionados con los derechos económicos, sociales y culturales, se cuenta con las observaciones del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales, que en el caso concreto ha dictado la Observación General 19, relativa al derecho a la seguridad social[11], prevista en el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en donde considera que “el derecho a la seguridad social incluye el derecho a obtener y mantener prestaciones sociales, ya sea en efectivo o en especie, sin discriminación, con el fin de obtener protección, en particular contra: a) la falta de ingresos procedentes del trabajo debido a enfermedad, invalidez, maternidad, accidente laboral, vejez o muerte de un familiar; b) gastos excesivos de atención de salud; c) apoyo familiar insuficiente, en particular para los hijos y los familiares a cargo[12]”.

11. La seguridad social, en términos de lo expuesto en la Observación General 19 debido a su carácter redistributivo, desempeña un papel importante para reducir y mitigar la pobreza, prevenir la exclusión social y promover la inclusión social; al ser reconocida como derecho humano, es importante considerarla como un bien social y no como una mercancía o un instrumento de política económica o financiera. la referida Observación General 19 sanciona que, los Estados Parte deben proteger, incluso con carácter extraterritorial, el derecho a la seguridad social, impidiendo que sus propios ciudadanos y empresas violen este derecho en otros países[13].

---

[10] Cfr. Óp. Cit. Artículo 123.
[11] COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES, 39º período de sesiones. Ginebra, 5 a 23 de noviembre de 2007. OBSERVACIÓN GENERAL N.º 19. El derecho a la seguridad social (artículo 9)
[12] Óp. Cit. Párrafo segundo.
[13] Óp. Cit. Párrafo 54.

12. Por su parte, la Organización Internacional del Trabajo, ha reconocido que, el derecho a la seguridad social es, junto con la promoción del empleo, una necesidad económica y social para el desarrollo y el progreso; ha recomendado una estrategia bidimensional, para lograr una seguridad social universal, que comprende dos dimensiones: dimensión horizontal, que sugiere establecer y mantener pisos de protección social como un elemento fundamental de los sistemas nacionales de seguridad social, y la dimensión vertical, consistente en llevar a cabo estrategias de extensión de la seguridad social que aseguren progresivamente niveles más elevados de seguridad social para el mayor número de personas posible[14].

13. La seguridad social, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 2 del Pacto de Derechos Económicos Sociales y Culturales indica que, los Estados Parte deben de disponer, hasta el máximo de los recursos de que dispongan, para realizar plenamente el derecho de todas las personas, sin ningún tipo de discriminación, a la seguridad social. Ya que de acuerdo con la formulación del artículo 9 del Pacto las medidas que se utilicen para proporcionar las prestaciones de seguridad social no pueden definirse de manera restrictiva y, deben garantizar a toda persona un disfrute mínimo de este derecho humano. Así estas medidas provienen de dos tipos de planes: El plan contributivo expresamente mencionado en el artículo 9, que implica generalmente el pago de cotizaciones obligatorias de los beneficiarios, los empleadores y a veces el Estado, juntamente con el pago de las prestaciones y los gastos administrativos con cargo a un fondo común. Como ocurre en el caso que nos ocupa, ya que los trabajadores al servicio del Estado de Zacatecas, contribuyeron con aportaciones económicas preestablecidas, las que cubrieron durante su periodo laboral. Contempla también los planes no contributivos, tendiente a garantizar la universalidad del derecho a la Seguridad Social[15].

14. Así, la Seguridad Social, debe analizarse en dos vertientes, una como derecho universal, y cuyas estrategias están encaminadas a prevenir y eliminar la pobreza, la vulnerabilidad y la exclusión social y, como resultado de una vida laboral, en la que se cumplió con el plan contributivo estipulado, así la seguridad social de que nos ocupamos está íntimamente relacionado con el derecho al trabajo, ya que las personas que se vieron afectadas cumplieron con ciclo laboral que les hizo acreedores a la pensión.

15. En el Estado mexicano el derecho a la seguridad social, está contemplado en los apartados A y B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Mismos que, por el origen de la fuente de trabajo de las personas afectadas se retoma lo referente al apartado B, al estar dedicado a las prestaciones laborales y de seguridad social de los trabajadores al servicio del Estado Mexicano, numeral que en su fracción XI, inciso a) señala las bases mínimas de la seguridad social, a los accidentes y enfermedades profesionales; las enfermedades no profesionales y maternidad; la jubilación, invalidez, vejez y muerte[16]. En nuestro país, el acceso a la seguridad social está directamente relacionado con la condición laboral y favorece principalmente a quienes cuentan con un trabajo formal. No obstante que la seguridad social, debiera ser universal, como lo sugiere la Organización Internacional del Trabajo.

16. En atención a derecho a la seguridad social, tenemos que, los servidores públicos de la Federación, de las entidades federativas, de los Municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, de sus entidades y dependencias, así como de sus administraciones paraestatales y paramunicipales, fideicomisos públicos, instituciones y organismos autónomos, y cualquier otro ente público, recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades. Y por lo que hace a los conceptos de jubilaciones, no se concederán ni cubrirán jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, ni liquidaciones por

---

[14] Recomendación 202. Recomendación sobre los pisos de protección social, 2012. Rescatada de: https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R202

[15] Óp. Cit. Párrafo 4.

[16] **Artículo 123.** Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley. […]

El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán: **B.** Entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores: […]**XI.** La seguridad social se organizará conforme a las siguientes bases mínimas:

a) Cubrirá los accidentes y enfermedades profesionales; las enfermedades no profesionales y maternidad; y la jubilación, la invalidez, vejez y muerte.

servicios prestados, como tampoco préstamos o créditos, sin que éstas se encuentren asignadas por la ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo[17].

17. La seguridad social, representa una de las herramientas más eficaces que cualquier sociedad tiene a su disposición para combatir la pobreza y la vulnerabilidad. También debería percibirse, no sólo como una inversión instrumental en la paz social que fuese una condición indispensable para el desarrollo económico sostenible, sino también como una inversión que fuese esencial para el descubrimiento de la plena capacidad productiva de los individuos. La seguridad social es una necesidad social y económica[18]. En el Estado de Zacatecas, la organización y administración del régimen de seguridad social, está consignada en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas y, está a cargo del organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que se denominará "Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas[19]."

18. La seguridad social, para los trabajadores al servicio del Estado de Zacatecas, se contempla en dos regímenes; voluntario y obligatorio y por lo que hace al obligatorio comprende las siguientes prestaciones:

I. Pensión por jubilación;
II. Pensión por jubilación anticipada;
III. Pensión por vejez;
IV. Pensión por invalidez derivada de riesgo de trabajo;
V. Pensión por invalidez derivada por causa ajena a riesgo de trabajo;
VI. Pensión por viudez, orfandad y ascendencia;
VII. Pensión por orfandad;
VIII. Póliza de defunción;
IX. Póliza de ayuda para gastos de funeral;
X. Aguinaldo;
XI. Devolución de cuotas;
XII. Préstamos exprés;
XIII. Préstamos a corto plazo;
XIV. Préstamos a mediano plazo;
XV. Préstamos para adquisición de automóviles;
XVI. Préstamos hipotecarios;
XVII. Préstamos para adquisición de bienes y servicios ofrecidos por el ISSSTEZAC; y XVIII. Prestaciones sociales[20].

19. Así las cosas, el acceso al goce de la pensión, como parte de los derechos de seguridad social, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que es: "…una aspiración natural de un trabajador cesante o jubilado es disfrutar de la libertad y el descanso que supone cumplir con el tiempo de prestación laboral, contando con la garantía y seguridad económicas que representa el pago de la pensión íntegra a la que aquél se hace acreedor a partir de sus aportaciones[21]."

20. En mismo sentido se tiene que, cuando los derechohabientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas cumplieron con los requisitos establecidos en la ley del propio Instituto, el derecho a la pensión ingresó a su patrimonio, "y éstos adquirieron un derecho de propiedad sobre sus pensiones", por lo que no puede el Instituto, bajo ninguna circunstancia, suspender el pago de pensiones y jubilación, en cuyo caso, violentaría también su derecho a la propiedad[22].

---

[17] Cfr. Artículo 127, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
[18] OIT, Seguridad social para todos, una inversión en la justicia social y en el desarrollo económico, consultado en agosto de 2020, en; https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---soc_sec/documents/publication/wcms_secsoc_14145.pdf
[19] Artículo 6 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, consultada en: http://periodico.zacatecas.gob.mx/visualizar/054b8f50-90ac-48ef-87f3-f31f9fd03dd7;1.1
[20] Cfr. Artículo 11 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas.
[21] "Caso Acevedo Buendía y Otros ("Cesantes y Jubilados de la Contraloría") vs. Perú", Sentencia de 1 de Julio de 2009 (Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas), p. 131.
[22] Cfr. Caso "Cinco Pensionistas" Vs. Perú. Sentencia de 28 de febrero de 2003. Serie C No. 98, párrs. 138 y 141. https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_98_esp.pdf.

21. En primer lugar, se analizará la violación al derecho a la seguridad social, para posteriormente conocer el trato diferenciado de que fueron objeto los derechohabientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas. En el caso concreto, se tiene que, de manera inicial, el **C. Q1,** presentó queja a título personal, en donde manifestó ser pensionado del ISSSTEZAC, desde hace ocho años, tiempo durante el cual no tuvo problemas. Más, a partir de enero de 2019, comenzó a recibir los depósitos de su pensión, fuera de los días establecidos para ello, como lo son los días quince de cada mes, ya que éstos se tardaban hasta dos o tres días más, llegando al grado que, el depósito que debería recibir el día 15 de enero de 2020, se les realizó hasta el día 17 de enero de 2020. Mismo que se hizo de manera parcial, es decir, no se depositó el total de prestaciones a recibir, pese a que sí se le entregó un recibo temporal, por la cantidad correcta. Aseguró que, hasta la fecha de presentación de su queja, 24 de enero de 2020, no se había depositado el total de la prestación económica que debe recibir el 15 de enero de 2020. Refiere que se le dijo también que, por órdenes superiores, su depósito se realizaría hasta el día 31 de enero de 2020. Denotando así que, de manera temporal, se había suspendido el ejercicio del derecho a la seguridad social a que tienen derecho en calidad de pensionados, y que debió de ser recibido a más tardar el día 15 de enero de cada anualidad[23].

22. En su oportunidad, la **C. Q2** presentó, por su parte, queja también, en contra del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, la que hizo consistir en la afectación de su derecho a la seguridad social proveniente de la jubilación, la que obtuvo en el año 2013. Dijo que, desde el día 15 de diciembre de 2019, se les dejó de depositar puntualmente la pensión, retrasándonos hasta por siete días, y que, a la fecha de presentación de su queja, 27 de enero de 2020, se les adeudaba la segunda parte del aguinaldo, misma que debió de ser entregada el 15 de enero de 2020. Dijo que, en mismas circunstancias se encontraban las **CC. A1** y **A2**, a favor de quien interpone también su queja. Siendo así que, hasta ese momento, se tenía conocimiento de la ausencia de pago de las prestaciones de seguridad social de 4 personas jubiladas por el ISSSTEZAC.

23. Finalmente, el 29 de enero de 2020, el **C. Q3** presentó queja en la que manifestó ser también afectado por la ausencia de pago de las prestaciones de seguridad social a las que tiene derecho, queja que endereza también en favor de la **C. A3** y otras personas más, todas ellas pensionadas o jubiladas por el ISSSTEZAC, de quienes al igual que las personas quejosas que los precedieron, dijo no haber recibido la segunda parte del aguinaldo que debió haber recibido el día 15 de enero de 2020, y sentidamente exigió que no se repita esta situación y que se les pague oportunamente el día 15 de cada mes. Con lo que se suman, seis personas jubiladas o pensionadas del ISSSTEZAC, quienes se han visto afectadas en su derecho a la seguridad social, en su modalidad de pensión o jubilación.

24. En mismo sentido, el **C. Q3** presentó adhesión a su queja de otras 74 personas, las que se suman a la queja del **C. Q1** y a la de la **C. Q2**, junto con sus representadas **A1** y **A2**, dando un total de 79 personas pensionadas o jubiladas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, quienes de manera unánime aseguraron que se han visto afectados con el retraso en el depósito de numerario a que tienen derecho como prestación de seguridad social, y cuya obligación recae en el ISSSTEZAC. Las personas que aseguraron que se ha dejado de cubrir de manera puntual la prestación en numerario a que tienen el derecho a recibir el día 15 de enero de 2020, afectando con ello su economía personal y familiar, responden a los nombres siguientes: […].

25. Con los testimonios anteriores, tenemos por cierto que, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, ha violentado en agravio de estas personas, su derecho a la seguridad social ya que, como lo ha sostenido la CrIDH, es una aspiración natural de un trabajador pensionado o jubilado el de disfrutar de la libertad y el descanso que supone cumplir con el tiempo de prestación laboral, contando con la certeza, de que recibirá la contraprestación a que se hizo acreedor, precisamente por haber cumplido con el término legal de su vida laboral en activo. Contraprestación a que se hicieron acreedores a partir de sus aportaciones, y las aportaciones patronales

[23] Cfr. Artículos 74 y 75 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas.

correspondientes, a las que tienen derecho por conducto de la seguridad nacida del plan contributivo en el que participaron durante su vida laboral, que contemplaba el pago de cotizaciones obligatorias de ellos como beneficiarios, así como la aportación de sus diferentes empleadores, todos agentes del Estado de Zacatecas. Mismas que, al no recibirlas de manera puntual, modifican la estabilidad económica de los derechohabientes y con ello afectan el nivel de vida al que tienen derecho en base a las prestaciones de cada uno, y afectan también su patrimonio, al enfrentar quizá, responsabilidades financieras que, al no contar en tiempo con su efectivo, puede que se incrementen.

26. Por su parte, la autoridad involucrada, por conducto del entonces Director del ISSSTEZAC, el **L.A.E. FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ MUÑOZ**, no negó la suspensión parcial de sus obligaciones como responsable de la administración de los fondos y aportaciones de seguridad social del Instituto y, por ende, de los pagos de los pensionados y jubilados, argumentando como causa, la falta de liquidez, ante la desproporción entre trabajadores en activo, que son quienes realizan aportaciones a los fondos de pensiones y el número de personas pensionadas o jubiladas. Arguyó también que, tiempo atrás se adquirieron activos fijos, o bien se permitió que se cubrieran las obligaciones patronales, mediante la trasmisión en propiedad de bienes inmuebles, los que, al no constituir capital líquido, deben ser enajenados para cubrir con las obligaciones en efectivo que tiene en Instituto para con las personas pensionadas o jubiladas.

27. En el informe de autoridad que rindieron conjuntamente el **L.A.E. FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ MUÑOZ,** en ese entonces Director General; el **ING. ALEJANDRO ARGÜELLES ARELLANO,** Director de Administración de Finanzas; y la **DRA. MARTHA ISABEL SAUCEDO ENCINA,** Subdirectora de Pensiones, como se dijo, se excepcionan en atención a que los Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los estados de Baja California, Chiapas, Estado de México, Veracruz, Nuevo León y, Colima, se encuentran también enfrentado condiciones financieras similares. Aseguran también que, hay 4243 (cuatro mil doscientos cuarenta y tres), personas pensionadas o jubiladas, los que reciben aproximadamente 14 meses de salario. Condiciones que no le eximen de cubrir con las obligaciones de que como Instituto son deudores.

28. Es inverosímil que se argumente, como parte de la ausencia de liquidez, el que las personas pensionadas y jubiladas reciban 14 meses de lo que fue su salario, cuando esta disposición está contenida en la propia Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, ya que los mismos tienen derecho a las apartaciones mensuales que les corresponda, más 60 días por concepto de aguinaldo, de conformidad con lo establecido en el artículo 74 de la Ley del citado instituto, luego entonces, hacer notar las prestaciones reconocidas en ley, denota su desconocimiento y la falta de voluntad para dar cumplimiento a las mismas.

29. Agregan que, la parte patronal responsable de retener las cuotas de seguridad social, aportar la proporción que como patrón les corresponde y derivarlas a la Secretaria de Finanzas, para que ésta a su vez, haga la dispersión oportuna al Instituto, suele retrasar el pago de sus cuotas, causando la falta de liquidez para cubrir las prestaciones de los quejosos. Cuotas que se han cubierto mediante dación en pago de bienes inmuebles. Inmuebles que asegura, hoy en día se encuentran en venta o como lo cita, en subasta pública, ya que es necesario liquidarlos, porque en la actualidad solo son una mera reserva técnica que, hasta en tanto sean vendidos, podrán formar parte del efectivo que de liquidez al ISSSTEZAC.

30. Para ello, aportan gráficos, publicados en su página de transparencia, en donde se analiza la situación financiera del Instituto, y a su entender, justifica el por qué se retrasan algunas ocasiones los pagos, con lo cual, se reconoce la afectación que sufren las personas pensionadas y jubiladas del ISSSTEZAC, y de las cuales 79 acudieron a este Organismo a exponer el retardo de que han sido objeto en el pago de las prestaciones a que tienen derecho.

31. Por lo que hace al caso concreto del primer quejoso, **C. Q1**, señalan al igual que él, que su pago se verificó el 17 de enero de 2020, más el agraviado aseguró que fue un pago

parcial, ya que el 15 de enero de 2020, se le entregó un recibo por la cantidad de $60,609.33, consistente en el total que debía de recibir, el que recibió parcialmente el día 17 de enero de 2020, fecha en que solo se le depositó la cantidad de $38,560.00, con lo anterior, se tiene por cierto que la autoridad pretende hacer creer que el pago del **C. Q1**, se verificó el 17 de enero, más omiten informar que éste fue parcial. Pago parcial que sí informó la **LIC. ESTHER CONTRERAS CHÁVEZ,** Directora de Prestaciones Económicas y Sociales, quien remite informe a la **LIC. MARGARITA UREÑO MEDINA,** otrora Subdirectora Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, en donde aseguró que el 15 de enero de 2020, no se efectúo pago alguno, sino que el recibo a que hace alusión el quejoso, se estila para acreditar sobrevivencia del derechohabiente, y que no es hasta la entrega del CFDI[24], cuando se verifica el depósito, y reconoce que éste fue parcial, pues a la fecha de presentar su informe aseguró, aún no se había expedido el comprobante fiscal digital, ya que no se ha finiquitado este pago. Con lo que se tiene por acreditado el retardo en el cumplimiento de las prestaciones de seguridad social a que el **C. Q1**, tenía derecho.

32. Continua la autoridad informando de manera inicial que, el pago parcial a que hemos hecho referencia, se verificó el día 17 de enero, y da dos razones para ello; en primer lugar, reconoce que fue en cumplimiento al deber de cubrir dicha prestación, lo que es acorde con la realidad, ya que, efectivamente, es obligación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas dispersar puntualmente las pensiones de los derechohabientes que han alcanzado con una vida laboral ese derecho, más señalan en su informe otra razón que fue, "…*en virtud de la presión generada por la toma del edificio central del Instituto*…" Es decir, reconocen en ese informe conjunto que el ejercicio del derecho de manifestación de algunas personas pensionadas y jubiladas trajo aparejada presión y este fue el motivo por el cual se liberó el recurso y se hicieron los depósitos de las pensiones.

33. Por lo que hace a la toma del edificio, no fue un hecho que las personas quejosas hayan manifestado en su escrito de queja, más sí fue de la opinión pública, según se hizo circular en la prensa local[25]. Lo que es inverosímil es que la manifestación pública genere recursos y la presión de una manifestación provoque que se cumplan las obligaciones del Instituto. Por el contrario, denota que existía el recurso o bien, se gestionó, y por razones que no se expusieron, se había omitido cumplir con la obligación que se tiene frente al derecho de las personas pensionadas y jubiladas del instituto.

34. Continúan su exposición argumentativa indicando, que en el supuesto de que hubiera habido un retraso en el pago de la pensión, éste no ha sido recurrente, ya que se realizan las gestiones necesarias para que el recurso fluya de manera constante, y que el retraso que reconocen no violenta derechos humanos. Opinión que esta Comisión de Derechos Humanos no comparte, ya que como se ha expuesto, es un derecho innegable, que no puede restringirse ni suspenderse, ni de manera temporal, como en el presente caso existió.

35. La suspensión innecesaria del derecho de las personas pensionadas y jubiladas del ISSSTEZAC, se tiene hasta aquí por acreditada fehacientemente, más el dicho de la **LIC. ESTHER CONTRERAS CHÁVEZ,** Directora de Prestaciones Económicas y Sociales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, el que dirige a la **LIC. MARGARITA UREÑO MEDINA,** otrora Subdirectora Jurídica del citado Instituto precisó de manera indubitable que, en enero de 2020, el depósito se realizó "atendiendo a indicación", que se concretó con las personas que estaban encabezando la toma del edificio y llegaron con ellos al acuerdo de que detuvieran las protestas y liberaran el edificio. Reconoce además que, se terminó de pagar hasta el día 24 de enero de 2020. Con

---

[24] Comprobante Fiscal Digital.
[25] Cfr. http://ntrzacatecas.com/2020/01/16/jubilados-y-pensionados-toman-instalaciones-del-issstezac/
https://ljz.mx/2020/01/17jubilados-y-pensionados-toman-instalaciones-del-issstezac/
https://zacatecasonline.com.mx/noticias/local/72490-jubilados-toman-issstezac-exigen-cumplimiento-a-tello
https://elsoldezacatecas.com.mx/finanzas/pensionados-toman-edificio-del-issstezac-pago-aguinaldo-mes-de-jubilacion-jubilados-pensionados-gobierno-del-estado-4708816-html
http://televisaregional.com/zacatecas/noticias/jubilados-toman-instalaciones-del-issstezac-exigen-pago-de-pensiones-y-prestaciones

lo que se tiene que, efectivamente se depositó sin reconocer el derecho de las personas pensionadas, a recibir de manera puntual y sin limitaciones las prestaciones que forman ya parte de su haber patrimonial, sino que como se dice en informes, se pagó a razón de negociaciones y por presión, ignorando que las personas pensionadas y jubiladas no estaban buscando hacerse acreedores a una prestación esporádica, sino exigían un derecho que ya les asiste tras cumplir con los requisitos establecidos en ley y el cumplimiento de una vida laboral.

36. Por su parte, los **CC. L.C. ADOLFO DÁVILA JR. HERNÁNDEZ,** Director de Administración y Finanzas y **DRA. MARTHA ISABEL SAUCEDO ENCINA,** Subdirectora de Pensiones, ambos adscritos al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, rindieron informe conjunto en donde, una vez más, se reconoce el retardo injustificado en el depósito de las prestaciones de las personas pensionadas y jubiladas, al argumentar que, debido a que el Instituto presenta una problemática financiera, la que se vio agravada en el año 2019, y provocó "*el retraso en el pago a más de cuatro mil pensionados como derechohabientes del Issstezac, lo que impidió durante el mes de diciembre y enero pasados cumplir puntualmente con el depósito de los pagos a los pensionados y jubilados.*" Dicho contundente que, asegura que, el retraso en la dispersión de los recursos de las personas pensionadas y jubiladas, no corresponde solamente a las 79 personas que requirieron de la defensa de los derechos humanos que presta este Organismo, sino que, en diciembre de 2019, y enero de 2020, se afectó a más de cuatro mil.

37. Con el reconocimiento que hizo la **LIC. ESTHER CONTRERAS CHÁVEZ,** Directora de Prestaciones Económicas, de que se retardó el pago de las pensiones, cuando informó a la **LIC. MARGARITA UREÑO MEDINA,** en ese entonces Subdirectora Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, que el pago de la pensión en el mes de enero, se depositó "atendiendo a indicaciones", se tiene por cierto que de acuerdo al organigrama del propio del Instituto[26], la Dirección de Prestaciones Económicas, y la Subdirección Jurídica, con independencia del nivel jerárquico en que están ubicadas, no tienen autoridad intermediaria para con el Director General, de ahí que se presume que esa indicación que atendió, provino del **L.A.E. FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ MUÑOZ,** en ese entonces Director General, de ahí su responsabilidad administrativa al ordenar suspender temporalmente el pago de prestaciones de seguridad social al que tiene derecho las personas pensionadas y jubiladas, el que además deberá ser puntual, pues por su condición de vulnerabilidad, no pueden estar a expensas de "indicaciones", sino que deben de tener la certeza que la ley les marca, es decir, recibir puntualmente los días 15 de cada mes, el deposito del importe líquido de sus derechos.

38. En este momento de la investigación, es que con las facultades que le confiere, el artículo 19 de la Ley de Entidades Públicas del Estado de Zacatecas[27], el Gobernador del Estado nombra al **MAESTRO MARCO VINICIO FLORES GUERRERO,** como Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a quien se le requirió de informe, y en lo que interesa aseguró que los retrasos en el pago de las pensiones no han sido continuos o deliberados y sobre todo, argumenta que al momento de rendir informe han cesado las afectaciones que señalaron las personas que se dijeron agraviadas. Argumenta también la debilidad financiera del Instituto y reconoce que, en los meses de diciembre de 2019 y enero de 2020, no su cumplió de manera puntual con las obligaciones que se tienen para con las personas pensionadas, las que cita a razón de 4243, así como el monto total que en conjunto reciben anualmente, es decir, $965,000,000.00 (novecientos sesenta y cinco millones de pesos 00/100 M.N.). Entre otros argumentos ya esgrimidos por su predecesor, como la falta de liquidez, el número de personas pensionadas y el método de pago que se estiló en el pasado, mediante la cesión de pago, de bienes inmuebles que, requieren de enajenarse para contar con su valor en líquido.

---

[26] http://www.issstezac.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/ORGANIGRAMA-CGJ-y-SFP-19-1-1.pdf consultado el 6 de julio de 2021.

[27] ARTICULO 19.- El Director General será designado por el Gobernador del Estado, a terna propuesta por el órgano de gobierno del organismo descentralizado…

39. Finalmente reconoce el retraso indebido en la dispersión del concepto de aguinaldo, y por lo que hace a las personas quejosas, asegura que el pago de los **CC. Q1, Q3, A3, A1** y **Q2** se efectuó hasta el 31 de febrero de 2020; y el de la **C. A2** mediante transferencia del 30 de febrero de 2020, fechas inexistentes que, deben entenderse como los días 30 y 31 de enero de 2020, ello con la concatenación lógica con las pruebas que precedieron este informe, más no dejan de denotar que las obligaciones del Instituto que debieron cubrirse puntualmente el día 15 de enero de 2020, se postergaron en el tiempo durante 15 y 16 días más, en agravio de las personas que tiene derecho al pago de sus pensiones, con lo que, efectivamente se acredita que se cumplió con el pago de la segunda parte del aguinaldo, más que no se hizo en tiempo, creando así la incertidumbre en las personas pensionadas, a quienes se les sometió durante ese tiempo a un estrés y sufrimiento innecesario.

40. Se acredita el desfase en el pago de las prestaciones de las personas pensionadas y jubiladas con copia del estado de transferencias bancarias de los meses de enero y febrero de 2020, en las que se puede ver que, el día 28 de enero de 2020, se realizó una transferencia de pensiones, más las que en fecha 17 de enero de 2020, se cubrieron por presión. Con lo que una vez más se tiene por cierto que el total de personas pensionadas y jubiladas, recibieron con retraso el pago de la segunda parte del aguinaldo. Y en consecuencia todos ellos se consideran como afectados por los hechos de queja que nos ocupan. Debido a que se vulneró su legítimo derecho a recibir, de forma puntual, el depósito de las prestaciones que, por concepto de jubilación y pensión, tienen derechos.

41. Con tal informe, el **MAESTRO MARCO VINICIO FLORES GUERRERO,** Director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales del Estado de Zacatecas, al reproducir lo informado por su predecesor, instala la posibilidad de que la afectación a los derechos de los pensionados y jubilados, consistente en la dilación del depósito de sus prestaciones siga prevaleciendo, por lo que sirva la presente a instarle para que esto no sea así.

42. Ya que como se dijo, la seguridad social, y en este caso, el derecho de pensiones y jubilaciones, forma parte de los mecanismos que se tienen para elevar y dignificar el nivel de vida de las personas, adultas mayores, y se ha reconocido ampliamente que la seguridad social es una necesidad económica y social, que favorece el desarrollo y el progreso. En este caso, al tratarse de derechos productos del trabajo, y que previamente se traduce en una vulneración a los que están establecidos en ley, violentarlos o suspenderlos, al menos temporalmente, violenta derechos humanos, ya que, con ello, deterioran el nivel vida y la estabilidad económica de las personas afectadas.

43. En otro orden de ideas, es de reconocer los esfuerzos y gestiones que se han hecho, por el propio Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, ya que, de manera reiterada, se informó que se tiene convenios con la Secretaría de Finanzas, cuya participación como parte de la administración pública centralizada del Estado de Zacatecas es recaudar, registrar y administrar los recursos que correspondan al Estado por concepto de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, contribuciones de mejoras, e indemnizaciones; así como a los provenientes de participaciones y aportaciones federales, o transferencias y reasignación de recursos; y en general, los demás ingresos que tenga derecho a percibir el mismo, en los términos de las leyes aplicables y los convenios celebrados[28]. Gestión que, si bien forma parte de la búsqueda de soluciones, es evidente que ha sido insuficiente.

44. Por otra parte, este Organismo advierte que, la problemática de los personas pensionadas y jubiladas del ISSSTEZAC, ha sido atendida por el Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, quien por conducto de la Comisión Permanente de la Honorable LXIII Legislatura del Estado de Zacatecas, exhortó al **LIC. ALEJANDRO TELLO CRISTERNA,** Titular del Ejecutivo del Estado, para que diseñe e implemente un mecanismo integral inmediato para atender y resolver de fondo la problemática social y económica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas. Mecanismo que es de urgente aplicación y, este documento recomendatorio, refuerza dicha propuesta, en aras de que se recupere la viabilidad financiara del Instituto, y se garanticen los derechos

[28] Cfr. Fracción V, Artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas.

a que las personas tienen derecho en condición de pensionadas, jubiladas o personal en activo.

45. Se reconoce también el esfuerzo realizado por la LXIII Legislatura del Estado para, por conducto de la Auditoria Superior del Estado, iniciar un procedimiento de revisión de las condiciones financieras, durante la administración previa anterior y la actual, para que detecte la problemática real y actual que enfrenta el Instituto y así, encontrar soluciones conjuntas que permitan la solvencia del Instituto y, con ello, el cumplimiento puntual de todas sus obligaciones, lo que repercute en el ejercicio de las prerrogativas de los derechohabientes.

46. En el caso concreto, las personas en favor de quien se dicta el presente cuerpo recomendatorio, han tenido acceso a las pensiones que se contemplan en las fracciones de la I a la VI, del ordenamiento legal antes citado, siendo así pensionadas por jubilación; jubilación anticipada; o bien pensionados por vejez; invalidez o viudez. Todos los derechohabientes que interpusieron la queja que nos ocupa, oscilan en las edades que van de los 52 a los 77 años. De entre ellos, solo el 38%, es menor de 60 años, en tanto que el resto, es decir, el 62% pertenece al grupo etario de más de 60 años. Por tal motivo, las personas quejosas se ubican dentro del extracto social etario que, por solo esa condición, se encuentran en situación de vulnerabilidad, lo que da paso al análisis del siguiente derecho.

B) Derechos de los adultos mayores en conexidad con el derecho a no ser víctimas de discriminación.

45. La edad adulta, y el correspondiente envejecimiento de los seres humanos, es un proceso natural que se manifiesta en la disminución de las funciones de los órganos y sistemas corporales, y que ocurre durante todo el ciclo de la vida. Esto trae como consecuencia, una serie de cambios asociados con el desempeño físico, con la percepción que las personas tienen de sí mismas, con la valoración que los demás les asignan y con el papel que desempeñan en su comunidad.[29]

46. El envejecimiento, es un proceso natural, gradual, continuo e irreversible de cambios a través del tiempo. Estos cambios se dan en el nivel biológico, psicológico y social, y están determinados por la historia, la cultura y las condiciones socioeconómicas de los grupos y las personas. Por ello, la forma de envejecer de cada persona es diferente y entre los signos que determinan el envejecimiento de las personas se tienen:

- La edad física. Entendida ésta como los cambios físicos y biológicos que se presentan a distintos ritmos, mismos que dependen del sexo, lugar de residencia, economía, cultura, alimentación, tipo de actividades desarrolladas y emociones.
- La edad psicológica: cambios en las emociones, sentimientos, pensamientos y el significado que para cada persona tiene la vejez. Adicionalmente se presentan cambios en los procesos psicológicos, como la memoria o el aprendizaje y, la edad social: relacionada con los significados de la vejez, diferentes para cada grupo humano, según su historia, su cultura y su organización social.[30]

47. La edad adulta, se constituye como un reto, así considerado por la Organización Mundial de la Salud, que ha señalado que también constituye un reto para la sociedad, que debe adaptarse a ello para mejorar al máximo la salud y la capacidad funcional de las personas mayores, así como su participación social y su seguridad.[31] Ya que trae consigo el menoscabo funcional debido a que conlleva consecuencias físicas, psíquicas y sociales, y se refleja en problemas para realizar por sí mismas algunas actividades cotidianas, lo que incrementa las posibilidades de dependencia de cuidado. El proceso de envejecimiento, en consecuencia, puede acarrear para los adultos mayores un estado de vulnerabilidad frente a los demás sectores sociales.

---

[29] AGILAR Ana, DE LEÓN Linda, Derechos Humanos y Personas Adultas Mayores, Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos (COPREDEH), Guatemala, 2011, p. 5.
[30] INMUFRE, Estudio: Situación de los Adultos Mayores en México, disponible en: http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/101243_1.pdf
[31] Ídem.

48. La vulnerabilidad representa un estado de debilidad, la ruptura de un equilibrio precario, que arrastra al individuo o al grupo a una espiral de efectos negativos acumulativos. Uno de sus rasgos distintivos es la incapacidad de actuar o de reaccionar a corto plazo. La noción de vulnerabilidad no se limita a la falta de satisfacción de necesidades materiales, también incluye las conductas discriminatorias.[32]

49. En ese tenor, se entiende por grupo vulnerable a aquel que, en virtud de su género, raza, condición económica, social, laboral, cultural, étnica, lingüística, cronológica y funcional, son susceptibles de sufrir la omisión, precariedad o discriminación en la regulación de su situación por parte del legislador federal o local del orden jurídico nacional. En tal sentido, entre los grupos vulnerables se suelen mencionar los siguientes:

> a) La mujer pobre jefe de hogar, con niños a su cargo, y responsable del sostenimiento familiar.
> b) Menores y adolescentes en situación de riesgo social (niños en riesgo de salir del hogar, menores infractores y menores víctimas de violencia física, sexual o psicológica en el seno familiar, menores con padecimientos adictivos).
> c) Los menores que viven en la calle o los menores que, no obstante tener un hogar, a causa de la desintegración familiar o problemas de otra índole pasan todo el día en la calle.
> d) Los menores trabajadores (pepena, estiba, mendicidad, venta ambulante, limpia de parabrisas y actuación en la vía pública).
> **e) Las personas de la tercera edad. (En adelante, personas mayores[33]).**
> f) Las personas discapacitadas.
> g) La población rural e indígena que se encuentra afectada en forma alarmante por la pobreza.
> h) Las mujeres pobres, embarazadas y en estado de lactancia.
> i) Los jóvenes y las mujeres pobres afectadas por el desempleo.
> j) Los trabajadores pobres del sector informal.
> k) Los excluidos de la seguridad social.
> l) Las mujeres que sufren discriminación política y social.
> m) Los pueblos indígenas.[34]

50. Las primeras referencias a las personas mayores en los instrumentos internacionales de derechos humanos han sido indirectas; generalmente, se limitan a la seguridad social y al derecho a un nivel de vida adecuado. Así, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, se reconoce el derecho a las prestaciones sociales en la vejez[35]. Mientras que, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se considera "el derecho de toda persona a la seguridad social, incluso al seguro social"[36]. Tales disposiciones, desde luego, son aplicables por extensión a las personas adultas mayores, y son de preponderante importancia para el ejercicio de las libertades del ser humano durante la etapa de la vejez.

51. El primer convenio de los Estados miembros de las Naciones Unidas sobre derechos humanos, en el que se prohibió explícitamente la edad como un motivo de discriminación, fue la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, documento en el que se proscribe la discriminación en el acceso de las mujeres a la seguridad social en caso de vejez. Ulteriormente, la prohibición de la discriminación por motivos de edad fue ampliado en la Convención Internacional sobre la Protección de los

---

[32] GONZÁLEZ GALVÁN Jorge Alberto, HERNÁNDEZ María del Pilar, SÁNCHEZ-CASTAÑEDA Alfredo, La Pluralidad de los Grupos Vulnerables: Un Enfoque Interdisciplinario, IIJ-UNAM, México, 2001, p. 225.
[33] El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, opta por "personas mayores", término utilizado en las resoluciones 47/5 y 8/98 de la Asamblea General (*older persons*, en inglés, *personnes âgées*, en francés). Estos calificativos comprenden, siguiendo las pautas de los servicios estadísticos de las Naciones Unidas, a las personas de 60 años y más.
[34] Ídem, p. 225-226.
[35] Declaración Universal de los Derechos Humanos. Art. 25.1, "Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad".
[36] Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Artículo 12.1: Derecho a la salud 1. "Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental".

Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares y, posteriormente, en la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.

52. Ahora bien, la protección limitada a los derechos de las personas de edad que proporcionan los tratados existentes, se ha fortalecido en forma paulatina gracias a la interpretación progresiva que han realizado los órganos encargados de su supervisión. Así, el Comité de Derechos Humanos de la ONU, ha desarrollado el principio de no discriminación por edad en determinados casos, examinados en el marco de su procedimiento contencioso.[37]

53. Por otra parte, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales aprobó en 1995 su Observación General número 6, sobre los derechos económicos, sociales y culturales de las personas de edad, en la que se especifican las obligaciones que corresponden en este ámbito a los Estados que son parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales[38]. En dicha Observación, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales sostuvo que, los Estados Parte en el Pacto, están obligados a prestar especial atención al fomento y protección de los derechos económicos, sociales y culturales de las personas de edad.

54. Por lo que respecta al Sistema Interamericano, el 15 de junio de 2015, en el marco del Cuadragésimo Quinto Período de Sesiones de la Asamblea General, los Estados Miembros de la OEA adoptaron en Washington DC, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores[39]. Si bien el Estado Mexicano no ha ratificado dicha Convención, ésta representa sin duda el Instrumento Interamericano más importante en esta materia, mismo que debe servir como eje orientador para las políticas públicas que emprenda el Estado Mexicano en cuanto a la protección de los derechos humanos de este grupo etario al que históricamente se le ha vulnerado.

55. La discriminación por razones de edad, está prohibida en el orden jurídico nacional, así el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su párrafo establece que, queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

56. En el caso en concreto, la edad de las personas pensionadas y jubiladas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, les coloca en especial estado de vulnerabilidad, ya que la edad adulta trae consigo el deterioro de la salud, de las facultades físicas y psicológicas pues conlleva cambios biológicos, fisiológicos, psico-sociales y funcionales de variadas consecuencias, las cuales se asocian con interacciones dinámicas y permanentes entre el sujeto y su medio y con ello, la necesidad apremiante de un nivel de vida adecuado, que la certeza de recibir puntualmente su pensión trae consigo, que les permite acceder a la seguridad y atención y protección, y permitirles así seguir contribuyendo activamente a sus familias, amigos, comunidades y nación.

57. En el orden jurídico nacional, las disposiciones en materia de discriminación son de orden público y de interés social. Están encaminadas a prevenir y eliminar todas las formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona en los términos del Artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como promover la igualdad de oportunidades y de trato. En este caso, es precisamente la relación entre oportunidad y trato, el motivo de queja de los pensionados y jubilados del Instituto. A respecto la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, contempla como tal, a toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos

[37] HUENCHUAN Sandra, Los derechos de las personas adultas mayores en el ámbito internacional. Naciones Unidas-CEPAL, Chile, 2013, pág. 3-4.
[38] Ídem, p. 5.
[39] Información disponible en: http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_A-70_derechos_humanos_personas_mayores.asp

y libertades, cuando se base en uno o más de los siguientes motivos: el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otro motivo; También se entenderá como discriminación la homofobia, misoginia, cualquier manifestación de xenofobia, segregación racial, antisemitismo, así como la discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia[40].

58. Por su parte, la legislación vigente en el Estado de Zacatecas, proscribe toda forma de discriminación motivada por el origen étnico, nacional o regional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social o económica, las condiciones de salud, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil, el trabajo desempeñado, las costumbres, la raza, las ideologías o creencias religiosas, la migración, la apariencia física, modificaciones estéticas corporales o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas[41].

59. Por el impacto social que la discriminación provoca, debe entenderse también como un delito, imponiendo una sanción de uno a tres años de prisión o de ciento cincuenta a trescientos días de trabajo a favor de la comunidad y hasta doscientos días multa, al que por razones de origen o pertenencia étnica o nacional, raza, color de piel, lengua, género, sexo, preferencia sexual, edad, estado civil, origen nacional o social, condición social o económica, condición de salud, embarazo, opiniones políticas, apariencia física, modificaciones estéticas corporales o de cualquier otra índole, atente contra la dignidad humana o anule o menoscabe los derechos y libertades de las personas mediante la realización de cualquiera de las siguientes conductas:

I. Niegue a una persona un servicio o una prestación a la que tenga derecho;
II. Niegue o restrinja derechos laborales, principalmente por razón de género o embarazo; o limite un servicio de salud, principalmente a la mujer en relación con el embarazo;
III. Niegue o restrinja las oportunidades de empleo y los consiguientes derechos laborales, principalmente por razón de apariencia física o modificaciones estéticas corporales, o
IV. Niegue o restrinja derechos educativos.

60. Al servidor público que, por las razones previstas en el primer párrafo de este artículo, niegue o retarde a una persona un trámite, servicio o prestación a que tenga derecho, se le aumentará en una mitad la pena prevista en el primer párrafo del presente artículo, y, además, se le impondrá destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos, por el mismo lapso de la privación de la libertad impuesta[42].

61. Considerar a las personas pensionadas y jubiladas como susceptibles de vulnerabilidad es, además de un imperativo legal, un compromiso social. De ahí que los estándares internacionales impongan la obligación del respeto irrestricto de sus derechos, en este caso, al derecho a recibir de manera puntual el importe a la pensión o jubilación a la que se hicieron acreedores con motivo de sus aportaciones durante el tiempo que prestaron su servicio en activo para el Gobierno del Estado de Zacatecas. En este caso, las personas que optaron por el mecanismo de protección de derechos humanos que ofrece esta Comisión, aseguraron que fueron objeto de trato discriminatorio y diferenciado. En esencia aseguraron que, una vez que no vieron reflejado el depósito de la segunda parte del aguinaldo, acudieron o llamaron al Instituto para preguntar el motivo, y fue en estas ocasiones que recibieron un trato discriminatorio, al informárseles que, podía ser cubierto hasta el último minuto del día, que no había dinero o bien que se haría una selección para depositar de manera diferenciada, iniciando por quienes menos recibían.

---

[40] Cfr. Artículo 1, fracción III de la Ley Federal para Prevenir y Erradicar la Discriminación.
[41] Artículo 3 de la Ley para Prevenir y Erradicar Toda Forma de Discriminación en el Estado de Zacatecas.
[42] Cfr. Artículo 182 Bis, del Código Penal para el Estado de Zacatecas.

62. La legislación citada, para prevenir y erradicar la discriminación, es complemento del imperativo legal contemplado en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prohíbe atentar contra la dignidad humana, anulando o menoscabando libertades o igualdad real de oportunidades, en el presente caso, el menoscabo a la igualdad de oportunidades acaeció en contra de personas adultas mayores, que como se dijo están en situación de vulnerabilidad, por el solo grupo etario al que pertenecen.

63. Las personas quejosas citan que, fueron objeto de trato discriminatorio, en primer lugar, en su condición de personas pensionados, quienes han concluido su vida laboral y viven a expensas de las prestaciones de seguridad social a que se hicieron acreedores. Aseguran también que, se les informó que se haría una selección diferenciada para depositar sus prestaciones, en atención a que, se depositaría en primer lugar a aquellas personas que menos percibían, es decir, que, sin mayor argumento, a algunas personas se les postergaría, como al efecto ya se había retrasado su pago.
64. Al respecto, el **C. Q1** manifestó que, debido a los retrasos en sus depósitos, acudió al Instituto a solicitar información del motivo de éste y que, en vez de una respuesta satisfactoria, recibió “malos tratos, indiferencia y despotismo por parte del personal de Departamento de Pensiones del ISSSTEZAC”. El que hace consistir, en primer lugar, en la negativa a depositarle de manera inmediata, el monto de todas las prestaciones a que tienen derecho, y radicarle en su lugar, un depósito parcial, realizado el día 17 de enero de 2020. Aunado a lo anterior, se inconformó por la información que le proporcionó la **DRA. MARTHA ISABEL SAUCEDO ENCINA,** Subdirectora de Pensiones, quien le dijo que no había dinero y que los pagos se realizaran a partir de la semana que comprendió los días 20 al 24 de enero del 2020, que su pago se realizaría hasta el día 31 de enero de 2020 y que, esos se harían de manera selectiva, iniciando con quienes se les debía el importe del mes de enero, y se comenzaría por los salarios más bajos, para terminar con los más altos. Lo que califica como una conducta discriminatoria y diferenciada, al no recibir todas las personas pensionadas el mismo trato, concretamente al no depositarle a todas las personas de manera inmediata sus prestaciones.

65. Por su parte, la **C. Q2,** persona quejosa, por lo que hace al trato diferenciado, dijo sentirse discriminada, ya que, a algunos derechohabientes, se les pagó puntualmente salarios y aguinaldos, concretamente a las personas que reciben un menor salario; queja que interpuso también en favor de **A1** y **A2**, personas que, al igual que ella dejaron de recibir puntualmente el importe de su pensión, en razón al importe que reciben, es decir, de acuerdo a la base de cotización con la que trabajaron.

66. Por lo que hace al trato diferenciado, el **C. Q3** aseguró que sí se habían estado pagando algunas pensiones, pero que se inició con los derechohabientes que ganan menos, difiriendo el pago a quienes reciben más, causándole así estos problemas financiaros en la economía familiar.

67. En mismo sentido, ratifican queja los otros agraviados […]**,** quienes de manera sucinta detallan como se ha hecho una selección para el depósito de sus pensiones, causando con ello agravio a quienes se les postergó el pago.

68. Las personas que se adhirieron a la queja, manifestaron que, la selección hecha para depositar sus pensiones, a unas personas en primer orden y otras posteriormente, además de ser discriminatoria, trajo como consecuencias problemas económicos del orden familiar, es decir, reconocen que es ese ingreso la base de su sustento diario y de sus familias, y, por ende, suspenderlo o retrasarlo afecta su esfera de derechos, voz unánime y sentida que expresan el total de personas quejosas.

69. De manera inicial, se requirió informe al **L.A.E. FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ MUÑOZ,** otrora Director General del Instituto, quien, como se dijo lo rindió de manera conjunta con el **ING. ALEJANDRO ARGÜELLES ARELLANO,** entonces Director de Administración de Finanzas; y la **DRA. MARTHA ISABEL SAUCEDO ENCINA,** Subdirectora de Pensiones, quienes argumentando la situación financiera del instituto reconocieron que, en ocasiones, se retrasan los pagos. Situación que ha sido analizada previamente, y se

destaca que nada dicen en su informe sobre el motivo de programar los pagos en fechas diferentes y, sobre todo, el motivo por el cual a unas personas se les depositó y a otras no.

70. Por lo que para acreditar el pago diferenciado, se acude a lo informado por la **LIC. ESTHER CONTRERAS CHÁVEZ,** Directora de Prestaciones Económicas y Sociales que dirigió a la **LIC. MARGARITA UREÑO MEDINA,** en ese entonces Subdirectora Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, quien de mara explícita aseguró que, el pago se depositó atendiendo a indicaciones que recibió, consistentes en que, se iniciara con los pensionados que estaban en las negociaciones y llegar con ellos a acuerdos que detuvieran las protestas y liberaran el edificio. Dicho que si bien no reconoce que se haya pagado primero a quienes reciben menos dinero, sí dio la pauta para acreditar un trato diferenciado, ya que, recibió órdenes de, habido el retraso, pagar primeramente a las personas que estaban manifestándose en las instalaciones del Instituto, cuando los derechos son universales, en este caso, el universo a respetar su derecho al pago puntual de su pensión obedece al total de derechohabientes en condición de pensionados o jubilados, y no solamente a quienes ante la interrupción de su derecho, ejercieron uno interrelacionando como es el derecho a la manifestación pacífica.

71. Es de hacer notar, que las personas que de manera directa presentaron queja, señalaron que al momento de acudir a preguntar el motivo del retraso del pago de su pensión o bien llamar telefónica con mismo fin, recibieron trato inadecuado. A lo que, tanto la **DRA. MARTHA ISABEL SAUCEDO ENCINA,** Subdirectora de Pensiones, como la **LIC. ESTHER CONTRERAS CHÁVEZ,** Directora de Prestaciones Económicas y Sociales, reconocieron haber tenido contacto con las personas interesadas en que el retraso del pago de su pensión se suspendiera de manera inmediata, pero niegan que sus respuestas hayan sido inadecuadas, y por el contrario, reconocen que estuvieron atendiendo a cuanta persona acudió o llamó por teléfono, que escucharon respetuosamente los puntos de vista y que, de manera amable, educada y ecuánime, dieron respuestas a los reclamos, los que asegura la segunda de las nombradas, fueron incluso con uso de lenguaje coloquial. Trato mutuo que obedeció al momento de fricción entre la parte institucional y los derechohabientes. Mismo que si bien no se acreditó en ninguna de sus dos vertientes, es dable pensar que, quien ha visto cortado el suministro de recursos que le permite tener el nivel de vida a que tiene derecho, puede en aras a la desesperación, estrés y sufrimiento mostrar su frustración mediante el uso del lenguaje.

72. En el análisis del trato diferenciado de que fueron objeto los derechohabientes del ISSSTEZAC, por pensión o jubilación, se trae a la vista el contenido del informe que rindieron de manera conjunta los **CC. L.C. ADOLFO DÁVILA JR. HERNÁNDEZ,** Director de Administración y Finanzas y **DRA. MARTHA ISABEL SAUCEDO ENCINA,** Subdirectora de Pensiones, ambos adscritos al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, quienes, como se dijo, reconocieron la suspensión de los derechos de las personas pensionadas y jubiladas, que acaeció durante los meses de diciembre de 2019 y enero de 2020, quienes omitieron dar respuesta al por qué se depositó de manera escalonada, diferenciada y sobre todo, no indican el criterio que se siguió para depositar primero a algunas personas y luego a otras, de ahí que se sostenga que los criterios tomados para el depósito de esas pensiones no fueron uniformes, y conculcaron los derechos humanos de quienes no se les depositó el día 15 de enero de 2020. Además de que, al ser diferenciado el criterio a seguir para depositar los importes de pensiones, se dejó de observar el principio de universalidad que rige a los derechos humanos.

73. Acreditado el trato diferenciado, que se hizo consistir en el pago escalonado “atendiendo indicaciones” y no siguiendo los principios ineludibles de universalidad, interdependencia, progresividad e indivisibilidad, es preciso indicar quien resultó responsable del trato que dijeron recibir los quejosos, cuando indicaron que recibieron mal trato por parte de quien los atendió telefónica y directamente cuando solicitaron información de su pago. Al respecto y como se ha indicado fue la información de la **LIC. ESTHER CONTRERAS CHÁVEZ,** Directora de Prestaciones Económicas y Sociales con la que se acreditó el pago por un lado diferenciado, ya que no se cubrió a todos el mismo día y por otro, preferente en función de quienes estaban manifestándose y quiénes no. En tanto que la **DRA. MARTHA ISABEL SAUCEDO ENCINA,** Subdirectora de Pensiones, reconoció que ella materialmente recibió a

los quejosos, o atendió telefónicamente sus inquietudes así como la **LIC. ESTHER CONTRERAS CHÁVEZ,** Directora de Prestaciones Económicas y Sociales, quien también reconoció haber tenido contacto con las personas aquí quejosas de ahí que por conducto de este cuerpo recomendatorios se les insta para, tener un trato amable, educado y preferente para con las personas pensionadas y jubiladas, quienes por su condición laboral, edad y en algunos casos su salud, pueden sentirse discriminados y revictimizados en atención a las respuestas recibidas, como en el caso de las imputaciones que al respecto hicieron los quejosos

74. En otro orden de ideas, se analiza la la petición del **C. Q3,** persona quejosa en el sentido de que éste solicito se realizara una auditoría externa e independiente a ISSSTEZAC. En respuesta de autoridad, los **CC. L.C. ADOLFO DÁVILA JR. HERNÁNDEZ,** Director de Administración y Finanzas y **DRA. MARTHA ISABEL SAUCEDO ENCINA,** Subdirectora de Pensiones, ambos adscritos al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, negaron la competencia de este Organismo para iniciar la misma, por lo que solicitó se acuerde la improcedencia. Excepción operante que se analizó desde el momento mismo de dictar el acuerdo de calificación de la queja del **C. Q3,** lo que no es obstáculo para dar seguimiento a la iniciada por la Auditoría Superior, en la inteligencia que todo aquel mecanismo que coadyuve a encontrar una solución de fondo a la problemática que aqueja a los derechohabientes del ISSSTEZAC, redundará en el ejercicio cabal de sus derechos.

75. Por ello, se cuenta con evidencia de inicio de la citada auditoría, mediante el oficio de inicio de procedimiento que signó el **L.C. RAÚL BRITO BERUMEN,** Auditor Superior del Estado, a través del cual refiere que se inició una auditoria **al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas,** atendiendo a la notoria inquietud social que existe sobre su situación financiera así como a lo solicitado en el Acuerdo Legislativo número 15, de la Comisión Permanente de la Honorable Sexagésima Legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, de fecha once (11) de febrero del año dos mil veinte (2020). Por lo que la citada Auditoría Superior dio inicio el expediente de investigación […], con el fin de revisar la gestión financiera del mencionado Instituto, durante el período del quince (15) de septiembre del año dos mil diez (2010), al treinta y uno (31) de enero del año dos mil veinte (2020). Mismo que inició o fue notificado mediante cédula de notificación de Inicio de proceso de investigación del expediente número […], el día 18 de febrero de 2020.

76. Una vez removido el otrora Director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, y nombrado como tal al **MTRO. MARCO VINICIO FLORES GUERRERO**, se le requirió de diversos informes, y por lo que hace al recibido por este Organismo en fecha 27 de febrero de 2020, es que tenemos por acreditado que se dio un trato diferenciado a los derechohabientes por pensión o jubilación del citado Instituto, ya que ofreció la documental pública, que se hizo consistir en copia certificada del oficio […], del 25 de febrero de 2020, expedido por la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, en la cual se especificaron los depósitos realizados a través de transferencias bancarias del pago de la segunda parte del aguinaldo a Pensionados y Jubilados de enero 2020, en donde se especificó que los pagos se ejecutaron entre los días 29 de enero y el 05 de febrero de 2020. Informe que se robustece con la copia de la relación de las transferencias bancarias que adjuntó al mismo. Donde, efectivamente, se señalan el número de personas que en las citadas fechas recibieron el depósito de sus pensiones.

77. Informe que, concatenado con el que rindió la **LIC. ESTHER CONTRERAS CHÁVEZ,** Directora de Prestaciones Económicas y Sociales a la **LIC. MARGARITA UREÑO MEDINA,** otrora Subdirectora Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, se tiene por cierto que, a las personas que se manifestaron en las instalaciones del multicitado Instituto, se les cubrió el importe de sus pensiones de manera inmediata, para que detuvieron las manifestaciones y liberaran el instituto. Depósito que, a dicho de quien lo signó no fue ella quién lo determinó, sino que recibió indicaciones. Sigue manifestando en su informe que, al **PROFR. Q1,** se le pagó el día 17 de enero de 2020. Con lo que se acredita, en primer lugar, que tal y como lo manifiestan

los quejosos, no se realizó el pago puntual el día 15 de enero de 2020. Por el contrario, se inició a depositar hasta que los derechohabientes se manifestaron en las instalaciones del Instituto y que el periodo se abrió en el tiempo desde el 17 de enero de 2020, hasta el 05 de febrero de 2020.

78. Así las cosas, aunque la autoridad no reconozca lo dicho por los quejosos en el sentido de que se les brindó un trato diferenciado en relación con el importe que reciben por concepto de pensión, con lo informado por el Director General y la copia de la relación de transferencias bancarias, se tiene por cierto que, se tomó un criterio diferenciado para ir suministrando de manera escalafonada el pago retrasado de las prestaciones de los derechohabientes.

79. Criterio que no explica la autoridad, mismo que no tiene fundamento alguno, ya que, todos ellos tienen el mismo derecho a la pensión que en la medida de sus aportaciones y sueldos mientras se encontraban en activo fueron acreedores, y cualquier selección al respecto es errónea, ya que, como se dijo, al no depositarse de manera puntual, el día 15 de enero de 2020, como al efecto lo marca la ley de la materia, afectó al universo completo de personas pensionadas y jubiladas. Prolongándose esta afectación en el tiempo, para algunas personas hasta el 05 de febrero de 2020, afectando aún más su esfera de derechos.

80. Finalmente, y por lo que hace al criterio diferenciador, se tiene la comparecencia del **LIC. ADOLFO DÁVILA JR. HERNÁNDEZ** Director de Administración y Fianzas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, quien si bien no ostentaba ese encargo en la fecha de sucedidos los hechos, al ocuparlo ahora tomó conocimiento de lo sucedido y no duda en manifestar que tiene conocimiento de que el criterio que se tomó en consideración en ese momento fue el de cubrir la mayor parte de pensiones con una cuantía baja, dejando pendientes las pensiones con una cuantía alta. Con lo que se tiene por acreditado el dicho de las personas quejosas y con ello el menoscabo de sus derechos, ya que al igual que el total del universo de personas pensionadas y jubiladas tenía derecho a recibir puntualmente sus pagos.

81. Por lo antes expuesto, esta Comisión de Derechos Humanos, concluye que ningún criterio de selección de derechohabientes, puede suspender o restringir, ni al menos temporalmente, los derechos de algunos de ellos. Esto es así porque las características de los derechos humanos, son precisamente ser *erga omnes*, por imperativo constitucional, todas las personas en el territorio mexicano gozan de los derechos humanos reconocidos en el marco jurídico local y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, todas las personas deben de gozar igualmente de las garantías para la protección de todos sus derechos, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que establece la Constitución. En este caso, el derecho de las personas pensionadas y jubiladas del ISSSTEZAC, se suspendieron del 15 de enero de 2020, hasta que se efectuó el depósito de sus derechos como pensionados, algunos de ellos hasta el 05 de febrero de 2020, y toda vez que el **MTRO. MARCO VINICIO FLORES GUERRERO**, Director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado desde el 07 de febrero de 2020, según se desprende del nombramiento con el que acreditó su personalidad sostuvo en su informe el criterio diferenciador que se le reprochó al **L.A.E. FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ MUÑOZ,** en ese entonces Director General, de ahí que sirva la presente a instarlo a respetar los derechos humanos de los derechohabientes del instituto que dirige de acuerdo a los principios de universalidad, interdependencia, progresividad e indivisibilidad.

82. Así las cosas, es inconcuso que, las autoridades del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, incumplieron igualmente con el imperativo constitucional de respetar, proteger y garantizar el ejercicio de los derechos de las personas pensionadas y jubiladas del ISSSTEZAC. Adicionalmente, y habida cuenta de que se tomó un criterio diferenciado para el pago de las prestaciones de seguridad social, se violentaron también los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Con énfasis especial en el principio de universalidad, ya que el criterio de diferir en el tiempo los pagos de unas personas y los de otras diferirlas un poco menos, denota la inobservancia del principio de universalidad. En consecuencia, el Estado

Mexicano, por conducto de libre y soberano de Zacatecas, deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, a que se ha hecho alusión a lo largo del presente cuerpo recomendatorio.

83. No pasa desapercibido que, mediante informes progresivos que rindió el **MAESTRO MARCO VINICIO FLORES GUERRERO,** Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, recibidos los días 26 de marzo de 2020, y 11 de junio de 2020, se indicó y acreditó que los pagos de las personas pensionadas y jubiladas del Instituto se han realizado en tiempo, siendo que los correspondientes al mes de marzo, se concretó el día 13 de marzo, en tanto que los meses de abril y mayo de 2020, los días 15 de cada mes. Lo que, debe reconocerse con un avance en el respeto de los derechos de las personas pensionadas y jubiladas, reiteran do que no debe existir motivo alguno para que esto no siga siendo así.

84. En otro orden de ideas, se tiene que, el **PROFR. Q1** mediante escrito de queja del 09 de julio del 2020, argumentó que el cambio de Director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores no resuelve la problemática planteada, y las declaraciones en prensa tanto escrito como televisiva y digital del **MAESTRO MARCO VINICIO FLORES GUERRERO,** actual Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, abonan al trato diferenciado que han recibido como derechohabientes pensionados, ya que en ellas se asegura que la debilidad financiera del Instituto obedece a que éstos reciben prestaciones no contempladas en ley, y que las mismas les serán suprimidas. Lo que aseguró causa estrés en el colectivo de pensionados y jubilados, a favor de quien enderezó queja por estas manifestaciones del hoy titular del Instituto.

85. De las notas aportadas por el quejoso, tenemos que inicialmente, el periódico Página 24, en su apartado digital, del 20 de febrero de 2020, publicó nota con el título: “El Issstezac da pensiones escandalosas se Harán Revisiones y Juicios de Lesividad.” Iniciando así a hacer del conocimiento de la opinión pública, la posibilidad de controvertir jurídicamente algunas prestaciones que reciben pensionados y jubilados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas. Información que se publicó en febrero del 2020, justo cuando pensionados y jubilados estaban recibiendo de manera retardada algunas prestaciones que debieron recibir el 15 de enero de 2020.

86. En esa línea informativa, en junio de 2020, se retomó por la prensa local notas similares, entre ellas se rescata lo informado en la nota de prensa del rotativo estatal El Sol de Zacatecas, del 15 de junio de 2020, en el que se lee: “*lo que está fuera de la ley no se puede seguir pagando”*, *“se perderían aguinaldos para jubilados y pensionados, así como bonos especiales y de despensa*” y “*las prestaciones económicas de los empleados del ISSSTEZAC que no tengan sustento jurídico serán eliminadas, señaló el director.*” Misma nota e información que se reiteró en ese periódico en nota publicada el 29 de junio de 2020, con el título: “Perderán jubilados aguinaldo y bonos.”

87. Por su parte, el rotativo estatal Zacatecas en Imagen, publicó el 16 de mayo de 2020, que; *“Debido a las recomendaciones de la ASE, ya se analiza recortar prestaciones fuera de ley a los trabajadores y pensionados del Issstezac, tales como aguinaldo, bonos por el Día del Maestro, vales de despensa y bonos especiales, informó el director del instituto.”* Nota periodística que también publica el periódico digital, La Jornada Zacatecas, en la que se aseguró: “Marco Vinicio retirara bonos y aguinaldos.” Para finalmente publicarse en prensa televisiva con mismo contenido, precisamente en el noticiero local Nueve en vivo.

88. Notas que, el quejoso aseguró causan estrés en el total de pensionados y jubilados el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, en favor de quien presenta queja, la que al no contar con la efectiva representación del colectivo en favor de quien se quejó, se tuvo su queja como individual, acumulándose a sus antecedentes, es decir, a la queja marcada con el número CDHEZ/041/2020, que concluye con el dictado del presente cuerpo recomendatorio.

89. Ahora bien, al momento de rendir informe por estos hechos imputables directamente a su persona, el **MAESTRO MARCO VINICIO FLORES GUERRERO,** Director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, aseguró lo ya informado, es decir, que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, enfrenta una crisis financiera multifactorial, que además no es privativa de ese Instituto sino que la sufren también otros de nivel nacional y del resto de Estados de la República, los que deberán analizar su propia problemática y resolverla de acuerdo a su origen, ya que el hecho de que otros institutos similares sufran de coincidentes problemáticas no justifica que el del Estado de Zacatecas enfrente la crisis que dice tener.

90. Agregó el **MAESTRO MARCO VINICIO FLORES GUERRERO,** Director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, que las notas de prensa derivaron de una entrevista realizada a su persona el 12 de mayo del 2020, y las fechas de publicación obedecen a la programación propia de los medios de comunicación. Las que justifica en materia de libertad de expresión, prevista como derecho humano y regulada por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su artículo 6º, primer párrafo cita que, la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; y que el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. Arguyó además que, como Director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas está expuesto y obligado a informar sobre la situación general del mismo.

91. Al respecto, esta Comisión de Derechos Humanos, celebra la vigencia de la libertad de expresión en el estado mexicano, la que reconoce como fuente y base de la democracia y del estado de derecho. Libertad de expresión que está acotada a que con ella no se ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público. De ahí que el **PROFR. Q1** al considerar que con las manifestaciones del Director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, incidió en su vida privada y perturbó provocándoles ansiedad y estrés al conjunto de personas que en calidad de pensionados y jubilados son derechohabientes del citado instituto de seguridad social, es que se permitió ejercer por este medio su derecho de queja, a quien le está a salvo el derecho de réplica que de ser su interés, podrá ejercer en los medios de comunicación en que se publicaron las notas que le agravian, en los términos de la ley de la materia.

92. Como se dijo, el quejoso no acreditó personalidad para enderezar queja en favor del total de personas pensionadas y jubiladas, y con ello no fue posible conocer si el total de este colectivo se considera agraviado por las manifestaciones publicadas en los medios de comunicación, y tampoco si presentan estrés, ansiedad o temor con motivo de las notas de prensa. Al respecto la autoridad involucrada, considero que debería ser este Organismo quien provea la necesario para acreditar que el estrés argüido, en caso de existir y que este obedece a lo que publicaron los medios de comunicación y no es multifactorial. Petición que también realizó el propio quejoso, por lo que esta Comisión de Derechos Humanos, solicitó la intervención de un profesional de la conducta humana, y contó con un dictamen psicológico forense que se practicó al **C. Q1** persona quejosa.

93. Dictamen psicológico a cargo del **MAESTRO EN CIENCIAS FORENSES MARIO PESCADOR ESCOBEDO,** quien con la metodología que consideró adecuada para el caso, realizó entrevista estructurada al quejoso, examinó su salud mental y en relación al problema planteado, es decir, si el **C. Q1** presenta alteraciones en la esfera psicológica a raíz de los hechos de queja, concretamente de lo publicado en la prensa local, concluyó que sí presenta alteración en su esfera psicológica, signos de estrés elevado, llanto, irritabilidad, zozobra, cambios de conducta repentinos, y ansiedad anticipatoria. Documento profesional con que esta Comisión de Derechos Humanos, contó para acreditar el dicho del quejoso, al menos en su esfera psicológica personal.

94. Ahora bien, el hecho de que las manifestaciones de la libre expresión del **MAESTRO MARCO VINICIO FLORES GUERRERO,** Director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, hayan adelantado posibilidades o

medidas que el mismo citó como de aquellas que, "*se podrían llevar a cabo*" mismas que, no ha explorado el Instituto, creó la confusión y el estrés de la parte quejosa, quien consideró que estas medidas al ser publicadas en prensa, podía entenderlas como un hecho inminente y al estar fuera de los procedimientos jurídicos que le dieran sustento y legalidad violentaría sus derechos a la seguridad social, lo que el propio Director dice no ha ocurrido.

95. Luego entonces, tal y como lo arguyó el **MAESTRO MARCO VINICIO FLORES GUERRERO,** Director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, no se ha afectado la esfera jurídica del quejoso, en cuanto a sus percepciones por concepto de pensión, más no olvidemos que el grupo etario de las personas jubiladas y pensionadas es considerado como de aquellos potencialmente vulnerables, muchos de ellos no tienen otro ingreso que no sea aquel que proviene de sus pensiones, de ahí que, al creer que éstas se verían afectadas inminentemente y sin que mediara procedimiento alguno, causó en el mismo la ansiedad anticipatoria que reveló el dictamen psicológico forense.

96. Con lo que se tiene por cierto que, anticipar acciones futuras e inciertas, causó ansiedad anticipatoria en el quejoso, fenómeno que forma parte de los mecanismos de crecimiento de los trastornos de ansiedad y está en la base de muchas formas de malestar psicológico, entre ellas aquellas que se consideran alteraciones mentales graves que requieren de tratamiento profesional. Por tanto, es deseable que la información que se comparte con los medios de comunicación sea completa, para no hacer caer en el error y la ansiedad anticipada a los derechohabientes como ocurrió con el aquí quejoso. Lo que es imputable al **MAESTRO MARCO VINICIO FLORES GUERRERO,** Director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas.

VII. CONCLUSIONES DEL CASO.

1. Esta Comisión rechaza la vulneración del derecho a la Seguridad Social, en relación con el derecho a no ser objeto de discriminación por cuestiones de edad de los pensionados y jubilados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas. Vulneración que trasciende a su esfera patrimonial y personal, al crear un sufrimiento innecesario ante la incertidumbre de recibir las prestaciones a que tienen derecho de manera completa y puntual. Tiene por acreditado que, en el mes de enero de 2020, se incumplió con la obligación de depositar los importes de pensión el día 15 de ese mes, realizándose un pago parcial, escalonado y diferenciado, el que se trasladó hasta el 05 |de febrero de 2020, imputable al **L.A.E. FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ MUÑOZ,** entonces Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado.

2. Esta Comisión de derechos humanos, reconoce la importancia de la comunicación que debe tenerse con todas las personas, especialmente quienes, por cuestión de su edad, y condición laboral, son susceptibles de sentirse revictimizados por lo que insta a la **DRA. MARTHA ISABEL SAUCEDO ENCINA,** Subdirectora de Pensiones, así como a todo el personal que tenga comunicación directa con los derechohabientes a tener un trato amable y brindar información veraz de lo que le sea solicitado.

3. Esta Comisión de Derechos humanos reprocha al **MAESTRO MARCO VINICIO FLORES GUERRERO,** Director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, que en información difundida en la prensa local, haya especulado sobre posibles acciones a seguir para mejorar las finanzas de Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, creando confusión en la persona del **C. Q1,** quien además producto de esta información sufrió estrés elevado y ansiedad anticipada, en deterioro de su salud mental.

4. Esta Comisión de Derechos Humanos, se adhiere a la exhortativa que dictó la LXII Legislatura del Estado al Titular del Ejecutivo del Estado Alejandro Tello Cristerna, para que diseñe e implemente un mecanismo integral inmediato para atender y resolver de fondo la problemática social y económica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los

Trabajadores del Estado de Zacatecas (ISSSTEZAC), igualmente celebra que se haya ordenado a la Comisión de Vigilancia y la Auditoría Superior del Estado, realizar una auditoría a los ejercicios fiscales del ISSSTEZAC durante los gobiernos estatales de los ejercicios 2010 - 2016 y actual, instrumentos que coadyuven a encontrar una solución a la problemática real y actual de las finanzas del ISSSTEZAC.

VIII. REPARACIONES.

1. De conformidad con lo establecido en los artículos 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 51 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, al acreditarse una violación a los derechos humanos atribuibles a un servidor público estatal, mediante la presente recomendación se busca incluir las medidas que procedan para lograr la efectiva restitución de las personas afectadas en sus derechos.

2. Dicha reparación, de conformidad con los *Principios y Directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones",* adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 2005, las violaciones de derechos humanos deben contemplar, de forma apropiada y proporcional a la gravedad de ésta, una reparación plena y efectiva en las formas siguientes:, restitución, rehabilitación, satisfacción, indemnización, deber de investigar y garantías de no repetición. En el caso en concreto y ante la pérdida fatal, no es posible solicitar la restitución de los derechos humanos conculcados. Las reparaciones se contemplan también en la Ley General de Víctimas, en sus artículos 1, último párrafo, 7, fracción I y II, y particularmente en el texto legal del artículo 26, que establece que "Las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera oportuna, plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva por el daño que han sufrido como consecuencia del delito o hecho victimizante que las ha afectado o de las violaciones de derechos humanos que han sufrido, comprendiendo medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y medidas de no repetición", además por lo previsto en el artículo 27 del mismo ordenamiento legal, en este caso se decreta en favor de los derechohabientes, pensionados y jubilados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas.

A) De la indemnización.

1. La indemnización es una medida compensatoria que busca reparar los perjuicios económicamente evaluables que sean consecuencia de las violaciones a derechos humanos, ente los que se incluyen: el daño físico o mental; la pérdida de oportunidades, en particular las de empleo, educación y prestaciones sociales; los daños materiales y la pérdida de ingresos, incluido el lucro cesante; los perjuicios morales; los gastos de asistencia jurídica o de expertos, medicamentos y servicios médicos, psicológicos y sociales[43].

2. En el caso motivo de esta Recomendación, esta Comisión estima que la presente Recomendación constituye *per se* una forma de reparación para los pensionados u jubilados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, a quienes deberá inscribirse en el Registro Estatal de Víctimas, a fin de que tengan acceso a los servicios y al Fondo de ayuda, asistencia y reparación integral, previsto en la dicha Ley de Atención a Víctimas del Estado de Zacatecas.

B) De la rehabilitación.

1. Las medidas de rehabilitación buscan reducir los padecimientos físicos y psicológicos de las víctimas, a través del otorgamiento de servicios de atención médica, psicológica, jurídica y social que éstas requieran[44].

---

[43] Numeral 20 de los Principios y Directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, Asamblea General de las Naciones Unidas, 16 de diciembre de 2005.
[44] Ibid., Numeral 21.

2. En el asunto de estudio, los servicios de atención psicológica, jurídica y social deberán otorgarse a los **CC. Q1, Q2, Q3,** y **otros agraviados** pensionados y jubilados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, en su calidad de víctimas directas. De manera particular, al **C. Q1,** a quien se acreditó que tuvo una afectación en su salud emocional derivado de dicha situación.

C) De las medidas de satisfacción.

1. Estas medidas contemplan la verificación de los hechos y la relevación de la verdad, así como aplicación de sanciones jurídicas o administrativas a los responsables de las violaciones[45]. Por lo anterior, se requiere que la autoridad proceda a realizar la investigación administrativa que corresponda, a fin de determinar la responsabilidad y sanciones específicas en que incurrieron el **L.A.E. FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ MUÑOZ**, otrora Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, así como el **MTRO. MARCO VINICIO FLORES GUERRERO**, en su calidad de Director General en funciones, toda vez que se acreditaron que, con sus actuaciones, vulneraron los derechos humanos de los pensionistas.

2. Este Organismo insta a la **DRA. MARTHA ISABEL SAUCEDO ENCINA,** Subdirectora de Pensiones, así como a todo el personal que tenga comunicación directa con los derechohabientes del ISSSTEZAC, a tener un trato amable, respetuoso y a brindar información veraz, respecto a aquellos aspectos o inquietudes que éstos les manifiestan.

D) De las Garantías de no repetición.

1. Son aquellas que se adaptan con el fin de evitar que las víctimas vuelvan a ser objeto de violaciones a sus derechos y para contribuir a prevenir o evitar la repetición de actos de la misma naturaleza.

2. A fin de prevenir la violación de los derechos mencionados en párrafos precedentes, resulta indispensable que se capacite al **MTRO. MARCO VINICIO FLORES GUERRERO** y al personal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, en materia de derechos humanos, particularmente, en el derecho al trabajo, en su modalidad de derecho a las prestaciones de seguridad social, y en el derecho de las personas adultas mayores, en relación con el derecho a la no discriminación. Lo anterior, a fin de que actúen en calidad de servidores públicos con diligencia y atención, otorgando un trato libre de discriminación a sus pensionados y jubilados.

IX. RECOMENDACIONES.

PRIMERA. En el plazo máximo de un mes, contados a partir de la notificación de la presente Recomendación, se inscriba como víctimas directas de violaciones a sus derechos humanos, en el Registro Estatal de Víctimas, a los pensionados y jubilados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, a los **CC. Q1, Q2, Q3,** y **otros agraviados** a fin de que se garantice su acceso oportuno al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, previsto en la Ley de Atención a Víctimas del Estado de Zacatecas, debiendo remitir a este Organismo las constancias con que se acredite su cumplimiento.

SEGUNDA. En un plazo máximo de un mes, contado a partir de la aceptación de la presente Recomendación, se le brinde atención psicológica al **C. Q1,** si es éste su deseo, toda vez que se acreditó que tuvo una afectación en su salud emocional derivado de los hechos materia de la presente.

---

[45]Numeral 22 de los Principios y Directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, Asamblea General de las Naciones Unidas, 16 de diciembre de 2005.

TERCERA. En un plazo máximo de un mes, contados a partir de la aceptación de la presente Recomendación, se inicien los procedimientos de responsabilidad en contra del **L.A.E. FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ MUÑOZ,** en ese entonces Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales del Estado de Zacatecas, por el retardo en el pago de pensiones que debieron dispensarse el 15 de enero de 2020, en atención a que su responsabilidad administrativa por estos hechos, prescribe en tres años[46].

CUARTA. En un plazo máximo de un mes, contado a partir de la aceptación de la presente Recomendación, se inicie el procedimiento de responsabilidad en contra del **MAESTRO MARCO VINICIO FLORES GUERRERO,** Director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales del Estado de Zacatecas, por las manifestaciones verbales especulativas que trajeron consigo ansiedad anticipada en el quejoso, el **C. Q1.**

QUINTA. En un plazo máximo de un mes, contado a partir de la aceptación de la presente Recomendación, se conmine al personal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales del Estado de Zacatecas que tenga contacto directo con los usuarios y especialmente a la **DRA. MARTHA ISABEL SAUCEDO ENCINA,** Subdirectora de Pensiones, a tratar amable y diligentemente a los usuarios.

SEXTA. En un plazo máximo de un mes, contados a partir de la aceptación de la presente Recomendación, el Director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de lo Trabajadores del Estado de Zacatecas, haga firme compromiso con esta Comisión de Derechos Humanos, de no adelantar mediante notas de prensa, posibles procedimientos judiciales a seguir por ese Instituto que provoquen ansiedad anticipada a los derechohabientes.

SÉPTIMA. Se de vista de la presente recomendación a la Junta Directiva del ISSTEZAC, para que, en el marco de sus responsabilidades y competencias, determine como una prioridad el pago de pensiones y jubilaciones; y apruebe en ese sentido el presupuesto de egresos del ejercicio fiscal correspondiente a fin de que se cubran oportunamente las prestaciones de seguridad social a las que tengan derecho las personas pensionadas, iniciando con la petición oportuna de los recursos económicos indispensables para que se entreguen a las personas pensionadas, en tiempo y forma, las prestaciones de seguridad social a las que tengan derecho, y se remitan a esta Comisión las constancias que acrediten su cumplimiento.

OCTAVA. En un plazo no mayor a un mes, contado a partir de la aceptación de la presente Recomendación, se imparta a los servidores públicos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, cursos de capacitación en materia de derechos humanos, particularmente, en el derecho al trabajo, en su modalidad de derecho a las prestaciones de seguridad social, y en el derecho de las personas adultas mayores, en relación con el derecho a la no discriminación.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 53, párrafo segundo de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, se hace del conocimiento de la autoridad a la que va dirigida esta Recomendación, que dispone de un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente en que ésta se le notifique, para que manifieste si la acepta o no, en el entendido de que, de no aceptarla, su respuesta se hará del conocimiento de la opinión pública. En caso de que la acepte, se le notifica que dispone de un plazo de 15 días, contados a partir del vencimiento del término del que disponía para responder sobre la aceptación, a fin de enviar las pruebas de su cumplimiento.

---

[46] Cfr. Art. 74, Ley General de Responsabilidades Administrativas:

Por último, hágasele saber a la parte quejosa que, de conformidad con el artículo 61 de la Ley de este Organismo, dispone de 30 días naturales, computados a partir de la fecha de notificación del presente documento, para que en caso de que exista inconformidad con la misma, interponga el recurso de impugnación correspondiente ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Así lo determina y firma

_____

DRA. EN D. MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOS
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE ZACATECAS

Expediente: CDHEZ/253/2019

Persona quejosa: VD.

Persona agraviada: VD.

Autoridades responsables:

I. Elementos de la Dirección de Seguridad Pública del municipio de Fresnillo, Zacatecas.
II. Lic. Fidel Lucio Rojas, otrora Juez Calificador adscrito a la Dirección de Seguridad Pública del municipio de Fresnillo, Zacatecas.
III. Dr. Luis Antonio Domínguez Domínguez, médico adscrito a la Dirección de Seguridad Pública del municipio de Fresnillo, Zacatecas.

Derechos humanos vulnerados:

I. Derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica, en relación con el derecho a no ser objeto de detenciones arbitrarias.
II. Derecho a la integridad y seguridad personal, en relación con el derecho a la integridad física y psicológica.
III. Derecho a la propiedad y a la posesión.

Zacatecas, Zacatecas, a 11 de agosto de 2021, una vez concluida la investigación de los hechos que motivaron el expediente CDHEZ/253/2019, y analizado el proyecto presentado por la Visitaduría Regional de Fresnillo, la suscrita aprobó, de conformidad con los artículos 4, 8 fracción VIII, 17 fracción V, 37, 51, 52 y 56 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, en relación con lo dispuesto por los numerales 161, fracciones VIII, X y XI, 162, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 y 175 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, los acuerdos que se dirigen a la siguiente autoridad:

- **Recomendación No. 40/2021** al **LIC. SAÚL MONREAL ÁVILA**, Presidente Municipal de Fresnillo, Zacatecas, por lo que respecta a la violación de los siguientes derechos humanos, en agravio de **VD:**
  - ✓ Derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica, en relación con su derecho a no ser objeto de detenciones arbitrarias; así como a la integridad y seguridad personal, en relación con su derecho a la integridad física y psicológica, por actos atribuidos a elementos de la Dirección de Seguridad Pública de Fresnillo, Zacatecas, acontecidos en fecha 3 de junio de 2019.
  - ✓ Derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica, en relación con su derecho a no ser objeto de detenciones arbitrarias, por actos y omisiones atribuidos al **LIC. FIDEL LUCIO ROJAS**, otrora Juez Calificador adscrito a la Dirección de Seguridad Pública de Fresnillo, Zacatecas, ocurridos en fecha 3 de junio de 2019.
  - ✓ Derecho a la integridad y seguridad personal, en relación con su derecho a la integridad física y psicológica, por actos y omisiones atribuidas al **DR. LUIS ANTONIO DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ**, médico adscrito a la Dirección de Seguridad Pública de Fresnillo, Zacatecas, acaecidos en fecha 3 de junio de 2019.
  - ✓ Derecho a la propiedad y a la posesión, atribuida al **LIC. FIDEL LUCIO ROJAS**, otrora Juez Calificador adscrito a la Dirección de Seguridad Pública de Fresnillo, Zacatecas, ocurridos en fecha 3 de junio de 2019.

- **Acuerdo de No Responsabilidad**, dirigido al **LIC. SAÚL MONREAL ÁVILA**, Presidente Municipal de Fresnillo, Zacatecas, por la presunta vulneración del derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica, en relación con su derecho a no ser objeto de detenciones arbitrarias, en favor de elementos de la Dirección de Seguridad Pública de Fresnillo, Zacatecas, por hechos acontecidos en fecha 4 de junio de 2019.

- **Acuerdo de terminación de queja por insuficiencia de pruebas para acreditar la violación a los derechos humanos**, dirigido al **LIC. SAÚL MONREAL ÁVILA**, Presidente Municipal de Fresnillo, Zacatecas, por lo que respecta a la violación del derecho a la propiedad y a la posesión en perjuicio de **VD**, atribuida a elementos de la Dirección de Seguridad Pública de Fresnillo, Zacatecas, por hechos ocurridos el 03 de junio de 2019.

R E S U L T A N D O:

I. DE LA CONFIDENCIALIDAD.

1. De conformidad con los artículos 6º apartado A, fracción II y 16 párrafo segundo, ambos de la Constitución Política de los Estados Mexicanos y los artículos 23 y 85 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, los datos personales del quejoso, relacionados con esta Recomendación, permanecerán confidenciales, ya que éstos no son públicos.

II. RELATORÍA DE LOS HECHOS Y OBJETO DE LA CONTROVERSIA.

1. El 05 de junio de 2019, **VD** presentó queja en contra de elementos de la Dirección de Seguridad Pública de Fresnillo, Zacatecas, por probables violaciones a sus derechos humanos, de conformidad con los artículos 30, 31 y 32 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas.

Por razón de turno, en esa misma fecha, la queja se remitió a la Visitaduría Regional de Fresnillo, bajo el número de expediente citado al rubro, a efecto de formular el acuerdo de calificación de ésta, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 123 y 124 del Reglamento de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas.

Ese mismo día, la queja se calificó de procedente, pues los hechos materia de ésta, podían constituir violaciones al derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica, en relación con el derecho a no ser objeto de detenciones arbitrarias. Así como transgresiones al derecho a la integridad y seguridad personal, en relación con el derecho a la integridad física y psicológica. Y, finalmente, vulneración a su derecho a la propiedad y a la posesión.

2. Los hechos materia de la queja consistieron en lo siguiente:
A. **VD** ratificó como queja la denuncia que en fecha 05 de junio de 2019, presentó ante personal del Módulo de Atención Temprana Penal, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, con sede en el Distrito Judicial de Fresnillo. Mediante dicha denuncia, se dolió de que en fecha 03 de junio de 2019, entre las 12:30 y 12:40 del mediodía, mientras circulaba a bordo de su motocicleta a la altura del Mercado de Abastos de Fresnillo, Zacatecas, fue abordado por elementos de la Policía Preventiva Municipal, quienes abordaban la unidad marcada con el número […].

Explicó que, dichos elementos, le realizaron una revisión corporal de rutina, pudiendo percatarse de que uno de ellos, a quien identificó como **JUAN ÁLVAREZ**, *"el Viper"*, (de la investigación se desprende que el nombre correcto es **JUAN AGUILAR)**, sacó de la mochila que él mismo portaba, una bolsa que contenía hierba verde, tipo marihuana. Empero, le señaló de manera textual: *"mira lo que te hallamos"*, culpándolo de traer consigo dicha sustancia. Relató que, enseguida, otro elemento, al que solo identificó con el nombre de **ROLANDO**, (de la investigación se desprende que el nombre correcto es **JOSÉ ROLANDO**

NÚÑEZ), le pidió sacar sus pertenencias, para luego colocarle las esposas y subirlo a la unidad, donde le puso sus pies encima, aplastándolo.

VD especificó que, una vez que llegaron a las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública de Fresnillo, Zacatecas, el oficial **JUAN AGUILAR** le propinó un golpe en el lado derecho del estómago, con un *bat* de metal. Asimismo, narró que luego, el oficial **JOSÉ ROLANDO NÚÑEZ** lo sujetó, mientras que el elemento primero lo seguía golpeando con el bat; además de darle patadas en diversas partes del cuerpo. **VD**, aseguró que luego de ello el mismo oficial **JUAN AGUILAR** sacó una navaja, con la cual le hizo varios "piquetes" chiquitos en el lado derecho de su cabeza, área de la cual también le arrancó cabellos.

Por otra parte, el quejoso afirmó que el elemento de nombre **JOSÉ ROLANDO NÚÑEZ** tomó un corta uñas y con éste comenzó a picarle entre el dedo pulgar y la uña de la mano izquierda; luego, dijo, el oficial **JUAN AGUILAR**, *"el Viper"*, le puso una bolsa de plástico en la cara. De la misma manera, refirió que posterior a ello le pusieron una "chicharra", ya que sintió varios toques en ambos lados de la cara, así como en su columna. **VD** indicó que luego se percató del arribo de otra unidad oficial, de la cual no pudo identificar número económico; siendo ese el momento en el cual los elementos que lo agredían le limpiaron la cara con alcohol. Posteriormente, le indicaron que lo iban a meter por la mariguana que traía, y que si mencionaba algo al doctor sobre los golpes, lo pondrían a disposición por algún arma; razón por la cual, al momento de la certificación, no mencionó nada al **DR. LUIS ANTONIO DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ**, médico adscrito a la Dirección de Seguridad Pública de Fresnillo, Zacatecas, (a quien originalmente identificó como **LUIS FERNANDO JIMÉNEZ**).

Además, el quejoso aseguró que, pese a que traía consigo la cantidad de $3,500.00 (TRES MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N), al salir de las instalaciones solo le regresaron $1000.00 (MIL PESOS 00/100 M.N), con los cuales pagó una multa. Agregó que solicitó ser revisado nuevamente por el médico de la corporación; sin embargo, le dijeron que no.

B. Aunado a lo anterior, **VD** denunció que, al otro día, 04 de junio de 2019, abordaba su misma motocicleta, cuando, alrededor de las 20:30 horas, al transitar por la Avenida Paseo del Mineral, a la altura de Peñoles y colonia Minera, de la ciudad de Fresnillo, Zacatecas, le dio alcance la unidad número […] de la misma corporación. Detalló que, a bordo de ésta los mismos dos elementos, quienes descienden de la unidad y luego de revisarlo, le advierten de manera literal: *"estamos entrados, por si dices algo".*

3. En fecha 26 de julio de 2019, se recibió oficio signado por el **LIC. SAÚL MONREAL ÁVILA**, Presidente Municipal de Fresnillo, Zacatecas, mediante el cual remitió parte informativo, signado por el **SUBINSPECTOR LUIS ANTONIO ESTRADA HERNÁNDEZ**, entonces Director de Seguridad Pública de Fresnillo, Zacatecas.

III. COMPETENCIA.

1. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas es competente, en términos de los artículos 1º, 4º, 6º, 8º fracción VII, inciso A) y 31 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, en relación con los numerales 15, 22 y 23 de su Reglamento Interno, debido a que la queja se promueve en contra de servidores públicos del Ayuntamiento de Fresnillo, Zacatecas, por hechos ocurridos en el año 2019.

2. De conformidad con los artículos 123 y 124 del Reglamento Interior de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, este Organismo advierte que, de los hechos materia de queja, se puede presumir la violación de los derechos humanos de la parte quejosa y agraviada, y la responsabilidad por parte de los servidores públicos señalados.

Esta Comisión presumió la violación de los siguientes derechos:

a) Derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica, en relación con el derecho a no ser objeto de detenciones arbitrarias.
b) Derecho a la integridad y seguridad personal, en relación con el derecho a la integridad física y psicológica.

c) Derecho a la propiedad y a la posesión.

IV. PROCEDIMIENTO ANTE LA COMISIÓN.

Con la finalidad de documentar las presuntas violaciones a derechos humanos, así como para determinar la existencia o no de responsabilidad por parte de los servidores públicos señalados, este Organismo realizó entrevistas a las personas relacionadas con los hechos; se recabaron comparecencias de personal adscrito a la Dirección de Seguridad Pública de Fresnillo, Zacatecas; se solicitaron informes a las autoridades señaladas como responsables, así como informes en vía de colaboración; se consultó certificado médico de la víctima; se consultó la carpeta de investigación relacionada con los hechos; se realizó investigación de campo en el lugar de los hechos y se analizaron videos de cámaras de vigilancia relacionados con los hechos motivo de queja.

V. PRUEBAS.

Con base en lo estipulado en los artículos 48 y 49 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, en relación con los numerales 150, 151, 152, 153 y 154 del Reglamento Interior de este Organismo, durante el procedimiento realizado por esta Institución, se recabaron las testimoniales ofrecidas por la parte quejosa, así como los elementos probatorios documentales, remitidos por la autoridad señalada como responsable y demás documentales necesarios para emitir la resolución correspondiente.

VI. SOBRE LOS DERECHOS VULNERADOS.

A. Derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica, en relación con no ser objeto de detenciones arbitrarias.

1. Abordar el tema de los derechos humanos, equivale a afirmar que existen derechos fundamentales que las personas poseen por el hecho de serlo, por su propia naturaleza y dignidad; derechos que le son inherentes, y que, lejos de nacer de una concesión de la sociedad política, han de ser por ésta consagrados y garantizados.[1] Los derechos humanos aparecen pues, como un conjunto de facultades e instituciones que, en cada momento histórico, concretan las exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad humanas, las cuales deben ser reconocidas positivamente por los ordenamientos jurídicos a nivel nacional e internacional.[2] Dichos derechos, han sido clasificados de diversas maneras, según el momento histórico en el cual se ha realizado su estudio. Destacando así, la división en derechos de igualdad, derechos de libertad, y derechos de seguridad jurídica, entre otros.

2. Atendiendo a esta última clasificación, es importante enfatizar que el concepto de "seguridad" encuentra su raíz etimológica en la voz latina *securitas-atis*, cuyo significado es: "cualidad de seguro" o "certeza", así como "cualidad del ordenamiento jurídico, que implica la certeza de sus normas y, por ende, la predictibilidad de su aplicación"[3]. Consecuentemente, esta última acepción es la idónea para definir la seguridad jurídica como el conocimiento y la certeza que tienen los gobernados de qué es lo que la ley establece como como permitido o prohibido. Y cuáles son los procedimientos que se deben llevar a cabo en cada caso, según lo establecido en el marco legal de un país.

3. De tal suerte que, la seguridad jurídica, involucra para el gobernado la certeza de que su vida, su persona, sus papeles, su familia, sus posesiones o sus derechos deberán ser respetados por todas las autoridades. Y, en caso de ser necesaria su afectación, ésta se sujetará a los procedimientos y modalidades previamente establecidos en la Constitución o leyes secundarias[4]. Por lo tanto, se puede afirmar que los derechos de seguridad jurídica, son quizás los que mayor relación guardan con el estado de derecho[5]; puesto que suponen

---

1 TRUYOL y S., Antonio, *Los derechos humanos,* Tecnos, Madrid, 1979, pág. 6

2 PÉREZ L., Antonio, *Derechos humanos, Estado de Derecho y Constitución,* Tecnos, Madrid, 1984, pág. 84.

3 Real Academia de la lengua española, Diccionario de la Lengua Española, t II, 22ª, ed., Madrid, Espasa, Calpe, 2001, pág. 2040.

4 Las Garantías de Seguridad Jurídica, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2015, pág. 11.

5 CARBONELL, Miguel, Los Derechos Fundamentales en México, CNDH, 2004, pág. 585.

un conjunto de derechos públicos subjetivos a favor de los gobernados. Derechos que pueden oponerse principalmente a los órganos del Estado a fin de exigirles que se sujeten a un conjunto de requisitos previos a la emisión de un acto que pudiera afectar la esfera jurídica de los gobernados y así, éstos no caigan en la indefensión o en la incertidumbre jurídica[6].

4. En el Sistema Universal de Protección de Derechos humanos, específicamente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el derecho a la libertad personal se encuentra reconocido en el artículo 3°. Dicha norma, establece que todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad de su persona, mientras que el numeral 9, de dicho instrumento jurídico, prohíbe la detención arbitraria. Y, correlativamente, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en los numerales 9.1, 9.2 y 9.3, estipula que todas las personas tienen derecho a la libertad y a la seguridad personales, quedando prohibidas cualquiera forma de detenciones o prisión arbitrarias.

5. Por otra parte, la libertad, en términos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es *"la capacidad de hacer y no hacer todo lo que esté lícitamente permitido. En otras palabras, constituye el derecho de toda persona de organizar, con arreglo a la ley, su vida individual y social conforme a sus propias opciones y convicciones"*[7]. Luego entonces, la libertad, definida así, *"es un derecho humano básico, propio de los atributos de la persona, que se proyecta en toda la Convención"*[8]. Mientras tanto, la Seguridad es *"la ausencia de perturbaciones que restrinjan o limiten la libertad más allá de lo razonable"*; igualmente *"la seguridad también debe entenderse como la protección contra toda interferencia ilegal o arbitraria de la libertad física"*[9].

6. De su lado, en el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, el artículo 7.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, protege de manera general el derecho a la libertad y seguridad personales. En tanto que, los demás numerales, tutelan las diversas garantías que deben cumplirse a la hora de privar a una persona de su libertad, cuando dicha detención sea atribuible a un agente del Estado. Entonces pues, **la detención de una persona es legítima, si está contemplada en la legislación interna de un Estado Parte de la Convención**, pero, **al mismo tiempo, se ajusta a lo dispuesto por la propia Convención**[10]. Adicionalmente, **deben considerarse** circunstancias tales como **si la detención ha sido ordenada por una autoridad judicial**, o **si se está en situaciones de flagrancia**[11]. Ello, conforme a lo contemplado por el artículo 7.2, que de manera literal establece lo siguiente:

> *"Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados parte o por las leyes dictadas conforme a ellas".*

7. Bajo ese contexto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha establecido un criterio por medio del cual se ha pronunciado en el sentido de que, para analizar la privación de la libertad de una persona, deben tomarse en cuenta dos aspectos importantes, puesto que, en supuestos de detención calificados de legales, se debe respetar tanto el principio de tipicidad, como los procedimientos previamente establecidos. De este modo, se concluye que: nadie puede verse privado de la libertad personal sino por causas, casos o circunstancias expresamente tipificadas en la ley **(aspecto material**), pero, además, con estricta sujeción a los procedimientos objetivamente definidos por la misma **(aspecto formal)[12].**

8. Así pues, la detención o privación de la libertad de una persona será calificada como **ilegal, cuando no se realice con estricta sujeción a la normatividad interna, tanto en lo referente a los motivos y condiciones, como a los procedimientos establecidos**. Mientras que, la detención o privación de la libertad considerada como **arbitraria,** será

---

6 Ídem, pág. 13.

7 Corte IDH, *Caso Valle Jaramillo y otros.* Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 192, párr. 108.

8 Ídem.

9 Corte IDH, *Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez vs. Ecuador*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de noviembre de 2007. Serie C No. 170, párr. 53.

10 Corte IDH, *Gutiérrez Soler Vs. Colombia*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 12 de septiembre de 2005. Serie C No 132. párr. 52.

11 Ídem.

12 Corte IDH, *Caso Acosta Calderón*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de junio de 2005. Serie C No. 129, párr. 57.

aquélla que, **aún y cuando sea calificada de legal conforme a la normatividad estatal, se realice sin observar las disposiciones internacionales en materia de derechos humanos**. Es decir, aquélla que carezca de razonabilidad, proporcionalidad, garantías del debido proceso y garantías judiciales.

9. En el marco normativo interno, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el artículo 14, párrafo segundo, que: *"Nadie podrá ser privado de la libertad (…) sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho"*[13]. Adicionalmente, el artículo 16 párrafo primero, constitucional establece que: "*Nadie puede ser molestado en su persona (…) sino en virtud de mandato escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento*", pero además, en su párrafo quinto, el mismo precepto constitucional indica que: "*Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más cercana y ésta con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. Existirá un registro inmediato de la detención".*[14].

10. Se advierte entonces que, el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, faculta la detención de cualquier persona, siempre y cuando se actualice cualquiera de los siguientes tres formalismos: mediante orden de aprehensión girada por el Juez competente, por orden de detención en caso urgente, girada por el Ministerio Público, o bien, en caso de delito flagrante. Y, desde luego, el propio numeral impone a quien lleve a cabo tal detención, la obligación de poner inmediatamente a disposición de la autoridad competente a la persona detenida, y ésta, con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. Ello, en caso de que la conducta desplegada por el gobernado pueda constituir un hecho que la ley señala como delito, so pena de incurrir en arbitrariedad en la detención, si no se siguen tales formalidades.

11. En coherencia con lo anterior, el artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales acota los supuestos de flagrancia, bajo los cuales una persona puede ser detenida. Siento éstos, cuando la persona es detenida en el momento de estar cometiendo un delito, o bien, inmediatamente después de cometerlo es detenida, en virtud de ser sorprendida cometiendo el delito y es perseguida material e ininterrumpidamente; o bien, cuando la persona sea señalada por la víctima u ofendido, algún testigo presencial de los hechos o quien hubiere intervenido con ella en la comisión del delito y cuando tenga en su poder instrumentos, objetos, productos del delito o se cuente con información o indicios que hagan presumir fundadamente que intervino en el mismo.

12. En lo que a la figura de la flagrancia atañe, es útil insistir en que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 1596/2014, precisó que, lo flagrante es "*aquello que brilla a todas luces"*. Lo anterior significa que es evidente e inconfundible, por lo que la concurrencia de una conducta delictiva flagrante es una condición que forzosamente debe configurarse con anterioridad a la detención. Eso conlleva a resolver entonces que, la autoridad, no tiene facultades para detener a una persona ante la sola sospecha de que pudiera estar cometiendo un delito (o de que estuviera por cometerlo). O simplemente porque presuma que esté involucrado en la comisión de un delito, incluso aunque eso sea objeto de investigación, si no cuenta con una orden de detención del órgano ministerial; así como tampoco se puede detener con la intención de investigar.

13. A la par de la regulación del derecho a la libertad personal en el ámbito penal, el Derecho mexicano contempla legislación en materia de infracciones comunitarias y faltas a los bandos gubernativos. Normatividad que permite la intervención de autoridades administrativas y de Seguridad Pública, las cuales se encuentran facultadas para la aplicación de dicha normatividad, a efecto de mantener el orden y la paz pública. De este modo, la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, autoriza a las autoridades administrativas para aplicar sanciones a las personas que infrinjan los reglamentos

---

13 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, art. 14.

14 Ídem, art. 16.

gubernativos y de policía, limitando dichas sanciones aplicables, al cobro de multa, imposición de arresto hasta por 36 horas o trabajo en favor de la comunidad. Aunado a ello, el Constituyente precisó que, si el infractor no pagare la multa impuesta, ésta deberá conmutarse por un arresto que, en ningún caso, excederá de 36 horas[15]. Criterio que comparte nuestra Constitución Local, al facultar a la autoridad administrativa a aplicar las mismas sanciones, en un plazo no mayor a tres horas, a partir de que tengan conocimiento del asunto.[16]

14. En coincidencia con lo anterior, en fecha 05 de julio de 2002, se publicó el decreto mediante el cual se promulgó la Ley de Justicia Comunitaria para el Estado de Zacatecas, cuyo objetivo, entre otros, es crear un sistema de justicia comunitaria y establecer las sanciones administrativas que pueden imponerse conforme a la propia ley, por actos u omisiones que alteren el orden público. Y delimita que, como infracción comunitaria, debe entenderse el acto u omisión que viole el bando de policía y buen gobierno o altere el orden público, y como presunto infractor, a la persona a la cual se le imputa la comisión de una infracción comunitaria. Además, señala que, entre las autoridades que cuentan con facultades para su aplicación, se encuentra la Dirección de Seguridad Pública Municipal.[17]

15. Incorporado a lo anterior, cabe precisar que, la Ley de Justicia Comunitaria del Estado de Zacatecas, prevé la figura del Juez Comunitario, al cual, faculta entre otras cosas, para instaurar el procedimiento administrativo y aplicar las sanciones previstas en el punto anterior, por infracciones al Bando de Policía y Buen Gobierno, o a las disposiciones de la propia ley[18].

16. De ahí que, en el ámbito municipal, el Código Municipal Reglamentario de Fresnillo, Zacatecas, establece como uno de los servicios públicos del Ayuntamiento la seguridad pública, incluyendo dentro de ésta a la Policía Preventiva[19]. Asimismo, el propio ordenamiento legal precisa que, la seguridad pública y protección ciudadana, corresponde en forma primaria al propio Ayuntamiento, teniendo como fines los siguientes:

> I. Mantener el orden público dentro de la jurisdicción del Municipio y proteger los intereses de la sociedad.
> II. Vigilar y brindar protección a la ciudadanía.
> III. Prevenir en la medida de lo posible, la comisión de delitos, así como las faltas al propio Código Municipal Reglamentario y demás disposiciones legales de la materia, utilizando los medios adecuados que garanticen la integridad física de las personas infractoras y sus pertenencias.[20]

17. Bajo ese contexto, el citado Código Municipal estipula que, constituyen una falta administrativa, las acciones u omisiones individuales o de grupo, realizada en un lugar público o cuyo efecto se manifieste en él, y se altere o ponga en peligro el orden público o la integridad de las personas en su seguridad, tranquilidad o propiedades. Entendiéndose como lugares públicos, de conformidad con dicho ordenamiento: todo espacio de uso común y de libre tránsito, incluyendo las plazas, los mercados y los jardines; los inmuebles de uso general, tales como centros de espectáculos, diversión y recreo, así como los transportes del servicio urbano o similares públicos.[21]

18. Asimismo, el Código indica que, los miembros del cuerpo de Seguridad Pública, tienen entre otras, las obligaciones de actuar dentro del marco jurídico respetando en todo momento la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, las Leyes que de ellas emanen, así como las contenidas en el propio Código. Asimismo, dispone que deben conducirse con respeto a la comunidad; respetar y observar la protección de los derechos humanos. Desempeñar con honradez, responsabilidad y prontitud el servicio encomendado, absteniéndose de cometer actos de corrupción, abuso de autoridad o hacer uso de sus atribuciones para lucrar para sí o para interpósita persona. Y, en su caso, solicitar

---

15 Ídem, art. 21, párrafo sexto.

16 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, art. 32, párrafos sexto y séptimo.

17 Ley de Justicia Comunitaria para el Estado de Zacatecas, art. 1, 2, fracciones VI y VII y 5, fracción V.

18 Ídem, art. 8.

19 Código Municipal Reglamentario de Fresnillo, Zacatecas, art. 535, fracción VIII.

20 Ídem, art. 545.

21 Ídem, art. 552 y 553.

los servicios médicos de urgencia cuando dichas personas se encuentren lesionadas o en estado de gravedad, así como dar aviso a sus familiares o conocidos en tal circunstancia.[22]

19. Por otra parte, el citado ordenamiento, prevé la función conciliadora y calificadora, atribuyéndosela a la figura del Alcaide; funcionario que será designado por el Ayuntamiento, a propuesta del Presidente Municipal. Éste, contará, entre otras, con las siguientes atribuciones: conocer, calificar e imponer las sanciones administrativas municipales que procedan por faltas o infracciones al Código y demás disposiciones de carácter general, contenidas en los ordenamientos expedidos por el Ayuntamiento. Así como llevar un libro de registro donde se inscriban las personas infractoras y que contenga los datos mínimos de sus generales, la hora y fecha, así como el motivo y el monto de la infracción.[23] Quedando prohibido a éstos, girar órdenes de aprehensión; imponer sanciones que no estén señaladas en el citado Código Municipal Reglamentario o demás disposiciones legales. Conocer asuntos de carácter civil, fiscal, laboral, administrativo e **imponer sanciones de carácter penal; ordenar la detención que sea competencia de otras autoridade**s; y dañar la integridad de la persona[24].

20. En dicha línea normativa, a partir del 28 de marzo de 2018, entró en vigor el Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Fresnillo. En la exposición de motivos, se cita al Maestro Nava Negrete, quien, en lo concerniente sostiene que, tal instrumento jurídico, puede entenderse como:

> *"El ordenamiento de carácter general que expiden las autoridades administrativas para preservar el orden, la seguridad y la tranquilidad públicos. Regula las actividades de la administración y de los particulares, para asegurar esos objetivos, previendo las sanciones administrativas que corresponda aplicar a los infractores del mismo."*[25]

21. En la propia exposición de motivos, en un claro intento por garantizar la protección más amplia a las personas, se estableció de forma precisa que, el Capítulo Primero de dicho ordenamiento jurídico, determina que el Bando es **el primero de los instrumentos normativos que habrá de aplicarse en la geografía municipal, en sustitución de un anacrónico Código Municipal Reglamentario**. **Se establece** la regulación de la organización política y administrativa del municipio, así como **la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos**. Y se incluyen las obligaciones de las personas que se encuentren en este territorio, **además de las competencias, funciones, facultades y atribuciones de los servidores públicos municipales** de conformidad con la Constitución Federal, los Tratados Internacionales, la Constitución Política del Estado, la Ley Orgánica, y demás leyes aplicables[26].

22. Con base en las disposiciones del mencionado Bando, se entiende por servicio público: "*toda actividad técnica destinada a satisfacer las necesidades básicas de la población en distintos rubros, a través de la prestación de un servicio de la administración municipal centralizada y descentralizada, de particulares o de ambos, en condiciones de generalidad, uniformidad y regularidad; con la mayor cobertura y calidad posibles, buscando siempre el bienestar de habitantes del Municipio de Fresnillo".* [27] Además, faculta al Ayuntamiento, a través de sus dependencias, para organizar, administrar y reglamentar la creación, organización, administración, funcionamiento, conservación y explotación de las funciones y servicios públicos[28], entre los que se encuentra la Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito, en los términos de la Constitución Federal. [29]

23. En lo que incumbe a la seguridad pública, se establece que las autoridades municipales contarán con las atribuciones que, al respecto, prevén la Constitución Federal, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Constitución Política del Estado, la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Zacatecas, la Ley Orgánica, este Bando Municipal, y las demás disposiciones vinculadas en la materia. Mientras que, en lo que

---

22 Ídem, art. 547.

23 Ídem, art. 548.

24 Ídem, art. 549.

25 Exposición de motivos, para la promulgación del Bando de Policía y Gobierno, del Municipio de Fresnillo, pág 1.

26 Ídem, pág. 3.

27 Bando de Policía y Gobierno, del Municipio de Fresnillo, art. 62.

28 Ídem, art. 63.

29 Ídem, art. 64, fracción XIII.

respecta a Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia se regirán por la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y de la Delincuencia, leyes estatales de la materia, y lo establecido en el propio Bando.[30].

24. Por otro lado, en su artículo 132, el Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Fresnillo, alude también al supuesto de flagrancia, y establece de forma clara que, toda persona que sea detenida por la comisión de delitos flagrantes, será consignada inmediatamente a la autoridad competente, sin demora. Desde luego sin que esto lo exima de que se le apliquen las sanciones que le correspondan, por las infracciones cometidas al propio Bando y las demás disposiciones municipales de observancia general. Finalmente, en el precepto 133, estatuye que se entenderá que el presunto infractor es sorprendido en flagrancia, cuando se presencie la comisión de la infracción, o cuando inmediatamente después de ejecutada ésta, se le persiga materialmente y detenga.

25. En lo concerniente a las infracciones, el Bando contempla como tal, todo acto u omisión que altere o ponga en peligro el orden público y que contravenga las disposiciones contenidas en el propio Bando, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas que emita el Ayuntamiento, independientemente de la responsabilidad civil o penal, que motive la conducta de los infractores en el mismo hecho[31].

26. De este modo, en su artículo 134, establece las conductas que son consideradas como infracciones que constituyen faltas a contra la tranquilidad y el orden público, a saber:

> I. Portar o utilizar rifles o pistolas de municiones, postas de plomo, diábolos, dardos peligrosos o cualquier otra arma que vaya en contra de la seguridad del individuo, o que puedan causar daño en propiedades públicas o privadas, en sitios no permitidos o acondicionados para tal efecto;
> II. Fabricar, acopiar o vender cohetes u otros fuegos artificiales sin el permiso de la Autoridad Municipal y demás autoridades competentes;
> III. Detonar cohetes u otros fuegos artificiales causando molestia a la ciudadanía;
> IV. Alterar el orden, arrojar líquidos u objetos, prender fuego, o provocar alarma infundada en cualquier reunión, evento o espectáculo público, que pueda generar pánico o molestias a los asistentes;
> V. Provocar o incitar riñas causando molestias a las personas en lugares públicos o privados, ya sea individualmente o valiéndose de grupos o pandillas;
> VI. Subir a las bardas o cercos para espiar a los interiores de los domicilios o faltar al respeto a sus moradores;
> VII. Introducirse en residencias, locales, o lugares de acceso restringido sin la autorización correspondiente;
> VIII. Efectuar actividades en la vía pública que causen peligro al vecindario, se interrumpa el tránsito peatonal o vehicular y que pongan en peligro su vida o la de terceros;
> IX. Transitar en cualquier medio de transporte por las vías públicas, aceras o ambulatorias de las plazas o parques públicos incurriendo en molestias a la población;
> X. Arrojar de manera intencional sobre las personas objetos o substancias que causen molestias o daños en su físico o indumentaria;
> XI. Alterar, inutilizar, quitar o destruir la señalética colocada para regular los servicios públicos o indicar peligro;
> XII. No utilizar las medidas de seguridad necesarias, siendo el propietario o poseedor de un animal peligroso al encontrarse en la vía pública o lugares de uso común;
> XIII. Azuzar a un animal para dañar a personas o sus bienes;
> XIV. Mantener en propiedad privada o pública animales que pongan en peligro la integridad de las personas y sus bienes;
> XV. Molestar al vecindario con aparatos musicales o cualquier otro medio usado con alta intensidad, de conformidad con lo establecido en la Ley de Ingresos del Municipio;
> XVI. Pernoctar en las vialidades, parques, plazas, áreas verdes y demás sitios públicos, salvo en hospitales y centrales de autobuses por imperiosa necesidad;
> XVII. Realizar cualquier actividad en la vía pública con el propósito de solicitar dádivas de cualquier especie, y que dicha actividad cause molestias;

30 Ídem, art. 107.
31 Ídem, art. 130.

> XVIII. Interrumpir el paso de desfiles autorizados o de cortejos fúnebres, por sí o a través de vehículos, animales u otro medio;
> XIX. Dificultar u obstaculizar el libre tránsito sobre las vialidades o banquetas mediante excavaciones, topes, escombro, materiales, muebles u objetos, sin el permiso de la Autoridad Municipal;
> XX. Impedir u obstaculizar la realización de una obra de servicio social o beneficio colectivo sin causa justificada, o utilizarla antes que la autoridad correspondiente la ponga en operación;
> XXI. Abusar o aprovecharse de la ingenuidad, buena fe o ignorancia de las personas, lucrando mediante predicciones o adivinaciones, valiéndose para ello de cualquier medio;
> XXII. Asear, reparar, lubricar, revisar o vender vehículos automotores y sin motor o cualquier tipo de mercancía en la vía pública, alterando la libre circulación de vehículos o personas en las banquetas o arroyo vehicular, causando molestias, contaminación y mala imagen urbana;
> XXIII. Permitir, los padres de familia o las personas que ejerzan la patria potestad o la tutela sobre los menores de edad, que éstos, incurran en acciones que causen molestias a las personas o a sus propiedades;
> XXIV. Custodiar vehículos en la vía pública, a cambio de cualquier dádiva, no autorizada por el conductor;
> XXV. Apartar lugares de estacionamiento en la vía pública;
> XXVI. Utilizar lotes baldíos o construcciones en desuso para fomentar un ambiente de inseguridad, causar molestias o daños;
> XXVII. Propiciar por descuido o abandono de bienes inmuebles, molestias, daños o fomentar un ambiente de insalubridad o inseguridad;
> XXVIII. Causar daños o escándalo en el interior de los panteones, internarse en ellos en plan de diversión o hacer uso indebido de sus instalaciones;
> XXIX. Introducir o ingerir bebidas alcohólicas, o consumir cualquier otra sustancia tóxica, en centros escolares, cines, oficinas y recintos públicos;
> XXX. Transportar, manejar, almacenar o utilizar en lugares públicos o privados, combustibles y substancias peligrosas, sin el cumplimento de las normas correspondientes o las precauciones y atenciones debidas;
> **XXXI. Deambular en la vía pública en estado de ebriedad o bajo el influjo de sustancias tóxicas alterando el orden, e**
> **XXXII. Ingerir bebidas alcohólicas o sustancias tóxicas en vía pública, inmuebles desocupados o interiores de vehículos.**

27. Mientras tanto, el numeral 136, indica que constituyen faltas contra la autoridad, las siguientes:

> I. Obstaculizar o entorpecer el desempeño en el ejercicio de sus funciones del Presidente, Síndico, regidores o de cualquier servidor público;
> II. **Agredir física, verbalmente o con señas obscenas** al Presidente, Síndico, regidores o **cualquier servidor público, en el desempeño de sus labores o con motivo de las mismas;**
> III. Proferir palabras ofensivas o ejecutar actos irrespetuosos dentro de los edificios públicos;
> IV. Obstaculizar el funcionamiento de las líneas telefónicas destinadas a los servicios de emergencia o asistencial, o solicitar falsamente el auxilio de las mismas;
> V. Usar sirenas, uniformes, insignias, códigos o cualquier otro implemento de uso exclusivo de los cuerpos de seguridad pública y protección civil municipales, sin tener la facultad para ello;
> VI. Destruir, o maltratar intencionalmente, documentos oficiales, libros, leyes, reglamentos, circulares o cualquier otro objeto similar en oficinas e instituciones públicas;
> VII. No exhibir públicamente o negarse a presentar a la autoridad municipal que le requiera, la autorización, licencia o permiso expedida por el Municipio, y
> VIII. Impedir el acceso de la autoridad municipal cuando con motivo de sus funciones tenga que ingresar a fraccionamientos, colonias, edificios en condominio o cualquier inmueble privado.

28. De esta forma, en coincidencia con la Constitución General de la República, la Local de esta Entidad Federativa, la Ley de Justicia Comunitaria y el Código Municipal Reglamentario de Fresnillo, Zacatecas, el citado Bando de Policía y Gobierno, del Municipio de Fresnillo, enumera como sanciones a aplicar: la multa, el arresto hasta por treinta y seis horas y

prestar servicio o labor en favor de la comunidad; además de la amonestación pública o privada, entre otras. Entendiéndose dichas sanciones, como sigue:

> I. Amonestación: la reconvención pública o privada mediante el cual se llame la atención por escrito, que, por única vez, hará la autoridad municipal al infractor donde le dará a conocer la falta cometida y lo exhortará a no reincidir, apercibiéndolo de que se hará acreedor a sanciones mayores en caso de una nueva infracción.
> II. Multa: Consiste en el pago en efectivo que deberá hacer el infractor a la Dirección de Finanzas y Tesorería, tomando como base la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de cometer la infracción.
> III. Arresto: Medida de privación de la libertad, para tomar a una persona bajo custodia en el área de separos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal;
> IV. Trabajo en favor de la comunidad: Trabajo físico realizado por un ciudadano que tiene como objeto mejorar el entorno municipal como sanción a una infracción cometida[32].

29. Adicionalmente, conviene precisar que, en su artículo 170, el citado Bando estatuye que, entre las **autoridades responsables de su aplicación**, en lo que concierne a conocer y autorizar medidas de control, se encuentran el **Juez Comunitario** y el **Oficial Calificador**. En tanto que, **para conocer y sancionar**, faculta al **Juez Comunitario**, preferentemente sobre las infracciones comunes cometidas en contra de los bienes jurídicos tutelados en el Bando y las infracciones dispuestas en los reglamentos municipales. Y **al Oficial Calificador**, preferentemente sobre las **infracciones descritas en el Bando** y que **por su naturaleza deba tener conocimiento la Dirección de Seguridad Pública por conducto de sus elementos de policía**.

30. En último lugar, es necesario establecer que, en el numeral 174 del Bando en comento, se indica que, corresponde al Oficial Calificador, lo siguiente:

> I. Dictar las medidas de seguridad que considere pertinentes y en su caso, ratificarlas o dejarlas sin efecto.
> II. Conocer y calificar las infracciones, así como determinar las sanciones;
> III. **Poner en conocimiento de la autoridad correspondiente, cualquier delito del orden común o federal, incurriendo en responsabilidad en caso de omisión, y**
> IV. Tener bajo su responsabilidad el registro de infractores.

31. En lo que atañe a este último tema, este Organismo ha documentado, mediante diversas investigaciones en las cuales se ha visto involucrada la Dirección de Seguridad Pública de Fresnillo, Zacatecas, incluyendo la que nos ocupa, que los **Jueces Calificadores**, adscritos a la dicha Dirección, son los funcionarios a quienes se ha encomendado dicha labor. Bajo ese antecedente, en primer término, se analizará la actuación desplegada por los elementos de la corporación que efectuaron la detención de **VD**. Para posteriormente, estudiar la intervención del Juez Calificador que tomó conocimiento de los hechos, una vez que éste fue puesto a su disposición; a efecto de establecer si la detención del quejoso se advierte ilegal y/o arbitraria.

32. Primeramente, es importante establecer que este Organismo analizó los medios de prueba recopilados durante la investigación, bajo los principios *pro persona* y de interpretación conforme. Aunado a ello, a efectos de establecer la responsabilidad que le correspondió a los servidores públicos involucrados en los hechos materia de esta Recomendación, se hizo uso del contexto. Entendido como una herramienta orientada a establecer la verdad de lo acontecido ***"a fin de que salga a la luz pública ese acontecer soterrado que debe exponerse a la comunidad para que se implementen los correctivos necesarios en orden a impedir su reiteración".*** Siendo así, un instrumento utilizado por diversos Tribunales garantes de derechos humanos, a la hora de resolver hechos violatorios de derechos fundamentales[33].

33. Lo anterior, implica que dichos Tribunales, han conocido de diversos contextos históricos, sociales y políticos que les han permitido situar los hechos alegados como violatorios de

---

32 Ídem, art. 140 y 141.

33 Sentencia SCJ, SP16258-2015 de la Corte Constitucional de Colombia, citada en la sentencia SP14206-2016 del 5 de octubre de 2016.

derechos humanos, en el marco de las circunstancias específicas en que éstos sucedieron.[34] Favoreciendo, de este modo, en algunos casos, la caracterización de los mismos como parte de un patrón de violaciones, como una práctica tolerada por el Estado, o bien, como parte de ataques generalizados y/o sistemáticos hacia algún sector de la población.[35] Lo cual, en el caso específico cobró sentido desde el inicio de la indagación, al no obtenerse resultados positivos durante la investigación de campo efectuada el día 16 de junio de 2019. Ello, debido a la falta de colaboración de la ciudadanía, bien por temor a represalias; o bien por desconfianza en la obtención de resultados positivos, que redundaran en una sanción para las autoridades policíacas involucradas en el asunto.

34. De tal suerte que, el reconocimiento del contexto como marco de los acontecimientos de hechos violatorios de derechos humanos, las características de las partes y los hechos objeto de la prueba, constituyen el punto de partida lógica de un caso y su posterior resolución. Si se reconoce que los hechos de un caso obedecen a una situación estructural, y adicionalmente, se identifican los efectos diferenciales de las violaciones cometidas debido a las cualidades de las víctimas, éstas deben tomarse en cuenta al momento de determinar la aplicación de criterios específicos al caso concreto[36]. *"De esta manera, las autoridades deben aplicar estándares que combatan las relaciones de poder y los esquemas de desigualdad formulando reglas de protección de derechos que favorezcan a la población vulnerada, así como ordenar reparaciones efectivas y trasformadoras a favor de los derechos violentados".*[37]

35. Bajo esa lógica, y siguiendo la línea delineada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, este Organismo Constitucional Autónomo, resuelve los hechos del caso, justamente haciendo uso del contexto, como herramienta para determinar la violación a los derechos humanos de la parte quejosa agraviada. Partiendo además del hecho de que, según lo disponen la Ley y el Reglamento Interno que rigen su actuar, la apreciación de las pruebas es susceptible de realizarse bajo los principios de la libre valoración, la lógica, la experiencia y la legalidad, a fin de producir convicción sobre los hechos materia de la queja[38].

36. Entonces pues, para establecer la violación sistemática del derecho a la legalidad y seguridad jurídica, caracterizada por la práctica de detenciones arbitrarias en el país, es oportuno señalar como antecedente, la Recomendación General número 02/2018 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Mediante dicho instrumento recomendatorio, el Organismo Nacional advirtió que las detenciones arbitrarias a cargo de elementos de diversas corporaciones policíacas, constituyen una práctica común en México. Detenciones a las que, de origen, no se opone ni dicha Comisión, ni este Organismo; empero, se hace énfasis en que éstas deben ceñirse perfectamente al marco constitucional, legal y reglamentario, para evitar que se vulneren los derechos humanos de los gobernados, relativos a la legalidad y seguridad jurídica.

37. La contextualización sobre la práctica de detenciones arbitrarias, con la consecuente violación del derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica, se evidencia con el hecho de que, durante el periodo comprendido del año 1999, a los primeros meses de 2001, el Organismo Nacional recibió 323 quejas que fueron calificadas como detención arbitraria. Circunstancia que permite colegir que se trata de una práctica persistente, que vuelve indispensable y urgente poner fin a las actuaciones ilegales y arbitrarias de los agentes policiales. Ya que, a la práctica de detener arbitrariamente, se suma el hecho de que personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos lograra establecer, de la lectura de diversos partes informativos elaborados por elementos policíacos en distintas fechas, provenientes de diferentes partes de la República, y que obran en las evidencias de algunos expedientes de queja, que éstos se constituyen de transcripciones muy parecidas.

---

34 Corte IDH, Caso Osorio Rivera y familiares vs. Perú, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia del 26 de noviembre de 2013, Serie C No. 274, párr. 145; Caso Defensor de DDHH y otros vs. Argentina, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia del 28 de agosto de 201, Serie C, No. 283, párr. 73 y Caso Espinoza González vs. Perú, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia del 20 de noviembre de 2014, Serie C, No. 289, párr. 49.

35 Corte IDH, Caso Espinoza González vs. Perú, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia del 20 de noviembre de 2014, Serie C, No. 289, párr. 49; caso López Lone y otros vs. Honduras, Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, sentencia del 05 de octubre de 2015, Serie C, No. 302, párr. 43 y Caso Velázquez Paiz y otros Vs. Guatemala, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia del 19 de noviembre de 2015, Serie C, No. 307, párr. 43.

36 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Programa de Equidad de Género en la SCJN, "El principio de no discriminación en la ética judicial", Boletín "Género y Justicia", No. 2, agosto de 2009, pág. 136.

37 Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Recomendación 08/2019.

38 Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, art. 49, párrafo primero y Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, art. 93.

38. Aunado a ello, el Organismo Nacional advirtió que, la práctica recurrente en los hechos de las quejas que se analizaron, consistió en que los agraviados fueron detenidos por dichos agentes, cuando estos últimos efectuaban recorridos de **"revisión y vigilancia rutinarios**". Aparentemente, en aras de salvaguardar la seguridad pública y detectar la comisión de algún ilícito o bien, porque habían recibido en la guardia de agentes, denuncias "anónimas". Siendo que, al atenderlas, "casualmente", los agraviados fueron encontrados en "actitud sospechosa" y/o "marcado nerviosismo", además de que, en todos los casos, los elementos policiacos adujeron haber solicitado a los agraviados que se les permitiera efectuarles una "revisión de rutina", a la cual accedieron de "manera voluntaria".

39. En ese orden de ideas, resultó preciso que este Organismo analizara el caso que motiva esta Recomendación, siguiendo la línea trazada por la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y, desde luego, atendiendo a los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya competencia contenciosa fue aceptada por el Estado Mexicano. Lo que, invariablemente obliga a esta Comisión Estatal a realizar un estudio pormenorizado de los hechos, como ya se dijo, siguiendo los principios de interpretación conforme y *pro persona*, además del de Convencionalidad; de acuerdo a los estándares establecidos por el propio Tribunal Interamericano.

40. Es por ello que, en primer término, se hizo necesario el estudio de la actuación desplegada por los elementos de la Dirección de Seguridad Pública del municipio de Fresnillo, Zacatecas, quienes, en fecha 03 de junio de 2019, practicaron la detención de la que se dolió **VD**. En segundo lugar, aunque **VD** no se dolió del actuar del Juez Calificador que conoció de los hechos, esta Comisión, en un ejercicio de suplencia de la queja, analizó su actuación, logrando establecer que también incurrió en actos que culminaron con la violación a sus derechos humanos. En un tercer momento, por técnica jurídica y no por cómo sucedieron históricamente los hechos, se estudió la actuación de los elementos policiacos que, en fecha 04 de junio de 2019, participaron, de manera momentánea, en la vulneración del derecho a la libertad y seguridad jurídica del quejoso. Luego, se analizaron también las actuaciones y omisiones en que incurrió el médico adscrito a la Dirección de Seguridad Pública de Fresnillo, Zacatecas que realizó la certificación médica de **VD** en fecha 03 de junio de 2019. Y, finalmente, este Organismo Autónomo, realizó una serie de observaciones respecto de patrones e irregularidades que han sido identificadas de manera sistemática, con motivo de informes rendidos a este Organismo. Los cuales, se rindieron tanto en el expediente que motiva esta Recomendación, como en otros expedientes de queja; prácticas que, de no corregirse, podrían impactar en la vulneración de derechos humanos de los gobernados. Lo anterior, con el ánimo de contribuir con la Administración Municipal de Fresnillo, Zacatecas, a la debida promoción, protección, defensa y garantía de los derechos humanos, como obligaciones constitucionales de cualquier autoridad del país.

- <u>De la violación del derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica de **VD**, en relación con su derecho a no ser objeto de detenciones arbitrarias, atribuida a elementos de la Dirección de Seguridad Pública de Fresnillo, Zacatecas, por hechos ocurridos el 3 de junio de 2019.</u>

41. En cuanto a los hechos ocurridos el día 03 de junio de 2019, **VD** manifestó que, al circular en una motocicleta de su propiedad, alrededor de las **12:45 horas**, esto a la altura del mercado de abastos y la gasolinera (de la investigación se deduce que se trata de la gasolinera "[…]", sucursal Abastos), fue interceptado por elementos de la Dirección de Seguridad Pública de Fresnillo, Zacatecas, a bordo de la unidad […]. Describió que recibió indicaciones tendentes a que permitiera una revisión corporal, por lo que cuando se efectuaba dicha revisión, un elemento policiaco, al que identificó como **JUAN ÁLVAREZ**, le señaló de manera textual: "mira lo que te hallamos"; mostrándole en el acto, una bolsa que contenía hierba verde, al parecer mariguana. Asimismo, explicó que, otro elemento, al que identificó como **ROLANDO "N"**, le ordenó sacar sus pertenencias; indicación que atendió, sacando sus dos teléfonos y una cantidad de dinero. Siguiendo con su relatoría, el quejoso afirmó que el oficial **ROLANDO "N"**, le colocó las esposas; que luego lo subieron a la patrulla y finalmente fue trasladado a las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública

de Fresnillo, Zacatecas. Finalmente, explicó que, siendo alrededor de las **17:00 horas** del mismo 03 de junio de 2019, le dijeron que podía retirarse, previo a pagar una multa de $1000.00 (MIL PESOS 00/1001 M.N).

42. Al respecto, del parte de novedades que, en vía de informe remitió el **SUBINSPECTOR LUIS ANTONIO ESTRADA HERNÁNDEZ**, entonces Director de Seguridad Pública de Fresnillo, Zacatecas, al **LIC. SAÚL MONREAL ÁVILA**, Presidente Municipal y que éste a su vez, remitiera a esta Comisión, se desprende que los hechos habrían ocurrido a las **13:45 horas** del día 03 de junio de 2019. Específicamente, mientras la unidad […] realizaba recorrido de seguridad y vigilancia; aunque cabe precisar que, en dicho documento, no se estableció qué elementos tripulaban dicha unidad; lo que evidentemente resulta irregular, atendiendo al hecho de que el quejoso identificó a 2 de los elementos intervinientes.

43. Por lo cual, ante la ausencia de datos relativos a los elementos preventivos que participaron en los hechos, este Organismo no tiene la certeza de que los nombres que con posterioridad fueron proporcionados por el **SUBINSPECTOR LUIS ANTONIO ESTRADA HERNÁNDEZ**, en fecha 14 de agosto de 2019, correspondan en realidad al de todos los elementos intervinientes. Máxime si se toma en consideración que, en la Recomendación recaída al expediente **CDHEZ/138/2019**, este Organismo logró acreditar la práctica de "corregir" el parte de novedades remitido a esta Comisión. A ello, se suma además el dicho del quejoso en el sentido de que la unidad era abordada por 6 elementos, mientras que en el referido informe del ex Director de la corporación, se indicó que los elementos participantes fueron 4, a saber: **JUAN AGUILAR, EVERARDO ANTONIO DE LEÓN, RODOLFO PINALES SARABIA** y **JOSÉ ROLANDO NÚÑEZ.**

44. En relación con lo anterior, en dicha Recomendación, este Organismo también hizo notar que, la obligación de la autoridad, es remitir no un parte de novedades, sino el correspondiente Informe Policial Homologado (IPH). El cual, constituye el "*Informe que resume un evento (hecho presuntamente constitutivo de delito y/o falta administrativa) y hallazgos de una actuación policial; incluye el formato IPH, fotografías, punteo cartográfico y demás documentación que contiene la información destinada a la consulta y análisis por parte de los miembros autorizados del Sistema Nacional de Seguridad Pública*"[39]. (En el caso, cabe hacer notar que, por el momento en que sucedieron los hechos, aún estaba vigente el que data del año 2010). Por lo cual, se insiste, ante la ausencia de dicho documento oficial, o de aquel que acredite la asignación de servicio de los **CC. JUAN AGUILAR, EVERARDO ANTONIO DE LEÓN, RODOLFO PINALES SARABIA** y **JOSÉ ROLANDO NÚÑEZ** a la unidad […], durante el turno que sucedieron los hechos materia de queja, no es posible determinar la veracidad de lo narrado en el señalado "parte de novedades".

45. Ahora bien, cabe destacar que, mediante oficio recibido en fecha 03 de septiembre de 2019, el **SUBINSPECTOR LUIS ANTONIO ESTRADA HERNÁNDEZ**, entonces Director de Seguridad Pública de Fresnillo, Zacatecas, informó que, en fecha 07 de julio de 2019, el **C. ROLANDO NÚÑEZ** había causado baja de la corporación a su cargo. Motivo por el cual, no fue posible recabar su testimonio con relación a los hechos materia de la presente Recomendación.

46. Por su parte, en comparecencia rendida ante este Organismo, **EVERARDO ANTONIO DE LEÓN,** elemento de la Dirección de Seguridad Pública de Fresnillo, Zacatecas, adujo que ratificaba el señalado parte de novedades. Por otro lado, precisó que él en ningún momento bajó de la unidad […] en fecha 03 de junio de 2019 mientras se practicaba la detención de **VD**. Empero, llama la atención a este Organismo su explicación de que, al llegar a las instalaciones de la Corporación, recabó datos del quejoso y se dispuso a realizar su reporte. Es decir, resulta cuestionable que alegara que no se bajó de la unidad, que no especificara qué elemento o elementos realizaron la inspección corporal de **VD**, luego de la cual, al parecer encontraron los estupefacientes a que se hace alusión en dicho documento; y que, aun así, procediera a realizar un reporte de algo que, evidentemente no le constaba, al menos en su totalidad.

---

39 Acuerdo por el que se dan a conocer los Lineamientos para la integración, captura, revisión y envío del Informe Policial Homologado (IPH, previsto en la Ley Nacional del Sistema Nacional de Seguridad Pública, disponible en: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5151046&fecha=08/07/2010

47. De su lado, el **C. RODOLFO PINALES SARABIA**, elemento de la corporación en comento, también ratificó el contenido del multicitado parte de novedades; además, aclaró que en fecha 03 de junio de 2019, iba en la parte trasera de la unidad […] junto con el oficial **EVERARDO ANTONIO DE LEÓN** y que él fue quien realizó la revisión corporal del quejoso. Aunado a ello, detalló que, al momento de la revisión, encontró en el interior de la bolsa del lado derecho de su pantalón, una bolsa con las características de la mariguana, así como una bolsa *ziploc* que contenía en su interior un polvo blanco. Razón por la cual, procedió a su aseguramiento y, previa lectura de sus derechos, le explicó el motivo por el que fue trasladado a la Dirección de seguridad Pública Municipal. Finalmente, aclaró que en la unidad no iban 6, sino 4 elementos: los **CC. JUAN AGUILAR, EVERARDO ANTONIO DE LEÓN, JOSÉ ROLANDO NÚÑEZ** y él.

48. Finalmente, en el caso del **C. JUAN AGUILAR** este Organismo se vio imposibilitado para recabar su testimonio, en razón de la falta de colaboración de la Dirección de Seguridad Pública de Fresnillo, Zacatecas. Ya que, pese a los requerimientos realizados en fechas **15 de agosto de 2019**, mediante oficio **CDHEZ/VRF/5291/2019** y **11 de septiembre de 2019**, a través de oficio **CDHEZ/VRF/5291/2019**, éste no compareció. Siendo que, su inasistencia, se pretendió justificar por el **SUBINSPECTOR LUIS ANTONIO ESTRADA HERNÁNDEZ**, entonces Director de Seguridad Pública de Fresnillo, Zacatecas, alegando mediante oficio recibido en fecha 20 de septiembre de 2019, que dicho elemento se encontraba recibiendo un curso de capacitación en el Instituto de Formación Profesional; y por ello, no podía ser notificado de los requerimientos de esta Institución. Lo cual, no se pone en duda por esta Comisión, empero, eso no es motivo suficiente para que no colaborara con la investigación; pues tal omisión, resulta contraria a las obligaciones constitucionales de promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos, previstas en el párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Obligaciones que deben ser acatadas, sin excepción, por todos los servidores públicos en el ámbito de sus respectivas competencias.

49. Aunado a ello, el no realizar dicha notificación, implica un entorpecimiento en la labor de investigación de esta Comisión. Entorpecimiento que se contrapone a los deberes del Estado Mexicano en materia de prevención e investigación de las violaciones a derechos humanos. Lo cual se relaciona con lo establecido por el artículo 63 de la Ley que rige el actuar de este Organismo, que a la letra dice:

> *"De conformidad con lo establecido en la presente Ley las autoridades y servidores públicos involucrados en asuntos de la competencia de la Comisión, o que por razón de sus funciones o actividades puedan proporcionar información pertinente, deberán cumplir en sus términos con las peticiones de la Comisión en tal sentido."*

50. Ante ese panorama, esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas hace notar que, si bien el derecho a la libertad personal no es absoluto, no puede ser intervenido o suspendido de forma ilegal y/o arbitraria por las autoridades estatales. Es por ello por lo cual, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha desarrollado un criterio ampliamente conocido respecto de los casos en que ésta puede ser limitada; casos que deben ser excepcionales y autorizados constitucionalmente, en armonía con los tratados internacionales. En lo atinente, las órdenes de aprehensión, así como las detenciones en los casos de flagrancia y de urgencia se enmarcan en dichos supuestos excepcionales y están permitidas conforme a las formalidades que la naturaleza específica de cada una de dichas figuras exige.[40]

51. No obstante, dicha Sala aceptó (en los amparos directos en revisión 3463/2012 y 1596/2014), que pueden existir otro tipo de afectaciones momentáneas a la libertad personal, aclarando que dichos controles deben cumplir con parámetros de regularidad constitucional propios. Estos son los denominados controles preventivos provisionales, controles de los que la propia Corte brinda la denominación siguiente:

---

40 Acción de Inconstitucionalidad 10/2014 y su acumulada 11/2014, promoventes: Comisión Nacional de los Derechos Humanos e Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos, párrafos 61 y 64.

> *"Los controles preventivos provisionales son restricciones temporales al ejercicio de un derecho, las cuales no deben confundirse con una detención propiamente dicha, ya que no implican una privación del derecho de libertad personal, sino una afectación momentánea de la misma que deberá estar justificada por la autoridad y que, según se dijo en dichos precedentes, en muchos casos tiene como finalidad última la prevención, preservación o consecución de la seguridad pública".*[41]

52. Para desarrollar este criterio, la Primera Sala estudió las diversas actuaciones legítimas de las autoridades que son susceptibles de incidir en la libertad personal del gobernado. Tal determinación, encuentra su razón de ser en dos presupuestos de entendimiento constitucional. El primero, consiste en que la mayoría de los derechos humanos, incluido el derecho a la libertad personal, no son absolutos, como reiteradamente lo ha sostenido el propio Alto Tribunal. Por consiguiente, aunque el control preventivo provisional no tiene un sustento expreso en el texto del artículo 16 constitucional, éste se desprende de las facultades contenidas en el artículo 21 de la propia Ley Suprema. Facultades que se conceden a los elementos de seguridad pública en la prevención, investigación y persecución de posibles conductas que afecten los derechos de los demás; y, que, en consecuencia, se encuentran prohibidas por el ordenamiento jurídico nacional.[42]

53. En cuanto al segundo presupuesto, la Primera Sala sostuvo que los controles preventivos provisionales, se encuentran permitidos debido a que no constituyen un acto de privación del ejercicio de derechos, como puede ser una detención. Esto es, tales restricciones provisionales, son precisamente **afectaciones momentáneas al ejercicio de un derecho que no es absoluto;** consecuentemente, pese a que no se encuentre prevista expresamente cierta restricción provisional en el texto constitucional, tras una interpretación sistemática de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, **es legítima**. Siempre y cuando se realice en cumplimiento de lo previsto en el artículo 21 de la Constitución Federal y siempre y cuando se efectúe atendiendo a la concurrencia de una sospecha razonable.[43]

54. Así pues, las competencias propias de los agentes de seguridad pública implican actos de investigación o de prevención del delito, por lo que necesariamente existe algún tipo de incidencia o contacto entre agentes del Estado y sus habitantes que no actualiza el supuesto de detención. Por lo tanto, se pueden distinguir tres niveles de contacto entre una autoridad que ejerce facultades de seguridad pública y una tercera persona:

> a) Simple inmediación entre el agente de seguridad y el individuo, para efectos de investigación, identificación o de prevención del delito.
> b) Restricción temporal del ejercicio de un derecho, como puede ser la libertad personal, propiedad, libre circulación o intimidad.
> c) Detención en estricto sentido.[44]

55. Respecto del primer nivel de contacto, la Primera Sala indicó que éste no requiere justificación, toda vez que consiste en una mera aproximación de las autoridades con una persona, que no incide en su esfera jurídica. Verbigracia: cuando un agente de policía se acerca a una persona en la vía pública y le hace ciertos tipos de preguntas, sin ejercer algún medio coactivo y bajo la suposición de que dicha persona se puede retirar en cualquier momento.[45] Sin embargo, el problema radica en establecer que, efectivamente, los elementos policiacos partícipes de cualquier evento, logren justificar que verdaderamente se encontraban realizando recorridos de seguridad y vigilancia. Y no, como lo evidenció la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en la Recomendación General previamente citada, actuaron de mutuo propio. Lo cual, en el *sub judice* se acreditaría, por ejemplo, con el documento mediante el cual se realizó la asignación de la unidad oficial […] y el área dentro de la cual se realizarían los mencionados recorridos, por los **CC. JUAN AGUILAR, EVERARDO ANTONIO DE LEÓN, RODOLFO PINALES SARABIA** y **JOSÉ ROLANDO NÚÑEZ**, en fecha 03 de junio de 2019.

---

41 Ídem, párrafos 65 y 66.
42 Ídem, párrafos 67 y 68.
43 Ídem, párrafo 70.
44 Ídem, párrafos 72 y 73.
45 Ídem, párrafo 74.

56. Otro ejemplo, sería la existencia de algún reporte ciudadano realizado al Sistema de Emergencias 911 que ameritara la intervención policiaca; o, en su defecto, del que los propios elementos hicieren con motivo de su intervención policial, como en algunas ocasiones ha sucedido. Lo cual, en el caso tampoco aconteció, pues del informe rendido en vía de colaboración por el **C. JUAN RAMÓN CARRERA PÉREZ**, Coordinador del Subcentro C4, de Fresnillo, Zacatecas, no se obtuvieron datos que coincidieran con los hechos que motivan esta Recomendación. Lo cual se suma al hecho de que, como ya se apuntó, la autoridad no remitió el respectivo Informe Policial Homologado, relacionado con los hechos que motivan la presente Recomendación, sino una simple transcripción que se califica de "fiel". Lo cual, no es suficiente para acreditar su dicho; máxime si se toma en consideración que, en la Recomendación recaída al expediente **CDHEZ/138/2019**, esta Organismo acreditó la manipulación de información relacionada con dicho tema, al evidenciarse que, con relación a un mismo asunto, se elaboraron 3 "transcripciones fieles", de dicho parte de novedades.

57. Por otra parte, la restricción temporal del ejercicio de la libertad puede presentarse cuando una persona se siente razonablemente obligada por la autoridad a obedecer sus órdenes expresas o implícitas, lo cual puede resultar en una ausencia de movimiento físico. El Tribunal en Pleno coincide con la Primera Sala, respecto a que esta restricción a la libertad personal tiene que estar plenamente justificada en aras de que se fundamenta a partir del artículo 21 constitucional. De moto tal que, no es posible aceptar que cualquier autoridad pueda limitar el ejercicio de la libertad deambulatoria, sin razones objetivas que sustenten tal afectación.[46]

58. En adición, la Suprema Corte de Justicia de la Nación precisó que esta restricción provisional, puede significar un grado menor o mayor de intromisión, **siendo mayor cuando la autoridad aprecie de las situaciones fácticas que, por ejemplo, su integridad física corre algún peligro** al momento de restringir provisionalmente la libertad de un sujeto. O **que la persona resulta violenta o intente darse a la fuga, lo cual lo facultará para realizar sobre la persona y/o sus posesiones o propiedades un registro o revisión más exhaustiva, con la finalidad fundamental de prevenir algún delito**. [47] En cambio, la restricción provisional del derecho a la libertad será en **menor grado intrusiva**, si **se actualiza la sospecha razonable, pero no existen circunstancias fácticas que permitan a la autoridad percibir que la persona en cuestión es peligrosa o que su integridad física corre peligro**. Por lo que **estarán facultados para llevar a cabo solamente una revisión ocular superficial y exterior de la persona y/o de sus posesiones o propiedades.**[48]

59. En el caso concreto, de la narrativa del parte de novedades que se remitió a este Organismo por la autoridad, se desprende que, cuando **VD** advirtió la presencia de la unidad […] de la Dirección de Seguridad Pública de Fresnillo, Zacatecas, intentó darse a la fuga. Lo cual, se interpretó como una evasión a la autoridad, pues, además, se sostuvo, el quejoso mostró una *"actitud sospechosa",* como si hubiera *"perpetuado* (sic) *algún ilícito"*. Razón por la cual, uno de los elementos, (no se estableció cuál), le ordenó detenerse y descender de la unidad motriz para, posteriormente, realizar una revisión corporal y proceder a su detención; lo anterior, resulta a todas luces inadmisible e inverosímil. En primer lugar, porque, como ya se ha reiterado a lo largo de la presente Recomendación, la autoridad no aportó medio de prueba que acredite la asignación de los **CC. JUAN AGUILAR, EVERARDO ANTONIO DE LEÓN, RODOLFO PINALES SARABIA** y **JOSÉ ROLANDO NÚÑEZ**, para que en fecha 03 de junio de 2019, realizaran recorridos de seguridad y vigilancia en las inmediaciones del mercado de abastos de esta ciudad, sobre el Boulevard Varela Rico.

60. Además de que, como puede apreciarse de la propia narrativa de la autoridad, no se deduce que hayan agotado el primer nivel de contacto con el quejoso. Es decir, no especifican que hayan intervenido de manera momentánea el derecho a la libertad personal de **VD** y que, con motivo de ello, ante su actitud violenta y/o su intento de huida, se hiciere necesario el segundo nivel de contacto. Pues, incluso, nótese que ni del parte de novedades, ni de las declaraciones rendidas a esta Comisión, los elementos **EVERARDO ANTONIO DE**

---

46 Ídem, párrafo 75.

47 Ídem, párrafo 76.

48 Ídem, párrafo 77.

LEÓN y **RODOLFO PINALES SARABIA**, se deduce que éstos hayan hecho previamente uso de comandos verbales, a través de los altoparlantes, a efecto de pedirle a **VD** que se detuviera. Sino que, simple y llanamente, en una concepción meramente subjetiva, interpretaron la puesta en marcha de su vehículo, como un intento de huida. Lo cual, incluso cobra sentido con el análisis del dicho del propio **VD**, quien en su narrativa de hechos sostuvo que, al ir a bordo de su motocicleta, se le acercó la unidad oficial y de manera inmediata se le ordenó detener la marcha de su vehículo. Control provisional que, de ninguna manera tiene justificación, pues el hecho de que una persona ponga en marcha su vehículo, no implica *per se* que intente huir de la autoridad.

61. Dicho, en otros términos, ni de la versión de la autoridad, ni de la proporcionada por **VD** este Organismo advierte que se haya agotado el primer nivel de contacto de la autoridad; puesto que, ambas versiones, coinciden en que, de manera inmediata, se procedió a su revisión corporal. Lo cual, no debió suceder, puesto que, de acuerdo con el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los controles preventivos provisionales tienen una finalidad especifica. Como es: la de **evitar la comisión de algún delito, salvaguardar la integridad y la vida de los agentes policiacos**, o **corroborar la identidad de alguna persona, con base en información de delitos previamente denunciados ante la policía o alguna autoridad.** Circunstancias que, evidentemente, en el caso no acontecieron; por lo que, lo que en todo caso debió ocurrir, es que, la autoridad efectuara un primer acercamiento, cuestionando al quejoso y, solamente si este se tornaba agresivo o intentaba huir, llevar a cabo el segundo nivel en grado más intenso y efectuar entonces su revisión corporal. Pues de acuerdo con el citado criterio, sería ese el momento en el cual, de manera objetiva se pudiera advertir que un bien jurídico tutelado, como lo es su integridad estaría en riesgo. Por lo que, en consecuencia, la posterior detención de **VD**, resultó ilegal, al no apegarse a la normatividad interna[49]. Pues, además, porque como se verá más adelante, la autoridad no pudo probar que efectivamente, el quejoso, haya tenido en posesión las sustancias ilícitas que se indicó; tanto así que, no se desprende de autos, la puesta a disposición ante el Ministerio Público correspondiente.

62. Entonces pues, la realización de dichos controles, **excluye la posibilidad de que la autoridad pueda detener a una persona sin causa mínima que lo justifique**, **de lo contrario, bajo una circunstancia abstracta** -como la apariencia física de las personas, su forma de vestir, hablar o comportarse-, **podrían justificar su detención y revisión física cuando es evidente que no existen circunstancias que permitan explicar la sospecha de que se está cometiendo un delito[50]**. En el caso de la presente Recomendación, esta Comisión advierte la existencia de una circunstancia abstracta, como es que el solo hecho de que **VD** transitara en su motocicleta, fuera interpretado por los elementos policíacos como una actitud sospechosa. Calificada incluso como: *"como si hubiera perpetuado (sic) algún ilícito".*

63. Bajo esa óptica, la Primera Sala sostuvo que, las condiciones en las cuales la policía estará en posibilidad de llevar a cabo un control de detención, se actualizan **cuando la persona tenga un comportamiento inusual, así como conductas evasivas y/o desafiantes frente a los agentes de la policía**. Sin embargo, en la actualización del supuesto de sospecha razonada, no existe la condición fáctica descrita, ni tampoco la comisión del delito evidente y apreciable de forma directa. Así como tampoco las condiciones circunstanciales que justificaran la realización de un control preventivo provisional por parte de los agentes de la autoridad, ya sea porque haya una denuncia informal o anónima, o porque el sujeto exteriorice acciones que objetivamente den lugar a considerar que se pretende ocultar la realización de un delito[51].

64. Luego entonces, como ya se apuntó, previo a efectuar una intromisión más intensa, como el revisarlo corporalmente, los elementos policiacos no indicaron a **VD** que detuviera la marcha de su vehículo; y, por ende, no se actualizó una simple aproximación de la autoridad con éste, (lo que supondría un primer nivel de contacto). Por el contrario, de manera

---

49 Amparo directo en revisión 3463/2012. 22 de enero de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Julio Veredín Sena Velázquez.

50 Ídem.

51 Ídem.

inmediata se emprendió un contacto mucho más intenso, el cual, sin una justificación fáctica razonada, llevó a los elementos preventivos a realizar directamente una revisión corporal del quejoso. Lo cual, implica una afectación a su derecho a la libertad personal, pues en esas circunstancias, su posterior detención, resulta a todas luces ilegal. Esto es, para que este Organismo estimara justificada la constitucionalidad del control preventivo provisional, de acuerdo al criterio de la Primera Sala de nuestro Tribunal Constitucional, resultaba necesario que se actualizara la sospecha razonada objetiva de que **VD** estaba cometiendo un delito; y no sólo una sospecha simple, que derivó de un criterio subjetivo de los agentes preventivos.

65. En suma, las condiciones fácticas son las que, en el caso concreto, determinarían la permisión del grado de intensidad del control preventivo por parte de la autoridad. Pues como ya se indicó, la Primera Sala de nuestro más Alto Tribunal ha sustentado el criterio de que existen dos tipos de controles que pueden realizarse. El primero, denominado **preventivo en grado menor,** en el cual, los agentes de la policía pueden limitar provisionalmente el tránsito de personas y/o vehículos con la finalidad de solicitar información a la persona controlada, por ejemplo, su identidad, ruta, motivos de su presencia, etcétera. **En este control preventivo de grado menor,** también **los agentes de la policía pueden efectuar una revisión ocular superficial exterior de la persona** o del interior de algún vehículo[52]. Lo que indudablemente en el caso no aconteció; sino que, en un actuar ilegal y arbitrario, contrario al respeto a la legalidad y a la seguridad jurídica de cualquier gobernado, los elementos policíacos procedieron directamente a la revisión corporal de **VD**, derivando en su posterior detención.

66. En lo que atañe al control preventivo en grado superior, éste está motivado objetivamente por **conductas proporcionales y razonablemente sospechosas**, lo que implica que los agentes policiales estén en posibilidad de realizar sobre la persona y/o vehículos un registro más profundo. Esto, con la finalidad de prevenir algún delito, así como para salvaguardar la integridad y la vida de los propios agentes; en este supuesto, éstos podrían, además, registrar las ropas de las personas o sus pertenencias; así como el interior de los vehículos. En el caso concreto, este Organismo resuelve que, de conformidad con el multirreferido criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no se actualizaron circunstancias objetivas y particulares del delito y el sujeto que correspondieran ampliamente con las descritas en una denuncia previa. Así como tampoco, el sujeto controlado, **VD**, mostró un alto nivel de desafío o de evasión frente a los agentes de la autoridad.

67. Ahora bien, en el caso que motiva esta Recomendación, **VD** sostuvo que, tras su revisión corporal, el elemento **JUAN AGUILAR** le indicó de manera textual: *“mira lo que te hallamos”*; al tiempo que le mostraba una bolsa que, al parecer, contenía hierba verde con características propias de la mariguana. Sin embargo, éste aseguró que dicha sustancia, el propio elemento policíaco la sacó de una mochila que él portaba; afirmación que no pudo ser contrastada por esta Comisión, ante la incomparecencia de dicho elemento policíaco, atribuible de manera directa a la autoridad. Mientras que, en el parte de novedades aportado por la Dirección de Seguridad Pública de Fresnillo, Zacatecas, se indicó que, tras dicha revisión, le fueron encontradas a **VD** dos bolsas; de las cuales una contenía en su interior mariguana y la otra cocaína. Respecto de este tema, es importante señalar que, el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se encamina al hecho de que, si después de realizar un control provisional legítimo, los agentes policiacos advierten la comisión flagrante de algún delito, la detención del sujeto controlado será lícita, y también lo serán las pruebas descubiertas en la revisión que, a su vez, tendrán pleno valor jurídico para ser ofrecidas en juicio.

68. Empero, en el caso de la presente Recomendación, este Organismo estima que, dada la inconstitucionalidad de los controles provisionales anteriormente analizados, la posterior detención de **VD**, pese al supuesto hallazgo de dichas sustancias, se considera igualmente inconstitucional e ilegal. Aunado a ello, se advierte que, pese a la afirmación de la autoridad en cuanto a las sustancias que presuntamente se encontraron a **VD** entre sus ropas, el **LIC. FIDEL LUCIO ROJAS**, Juez Calificador que conoció de los hechos, no lo hizo de

52 Ídem.

conocimiento al Ministerio Público (lo cual se analiza en el siguiente apartado). Omisión que, derivado del actuar ilegal de los elementos policíacos, conlleva que no se conceda crédito a la versión de la autoridad, y sí a la de **VD.** Pues, además, debe hacerse énfasis en que, de acuerdo a los estándares fijados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los procesos donde se deciden derechos humanos, es la autoridad la que debe probar la veracidad de sus afirmaciones. Lo cual, en el caso concreto no aconteció, puesto que, además de que como ya se mencionó anteriormente, no se aportó el Informe Policial Homologado relacionado con estos hechos; no existió una colaboración de la autoridad. Lo que se hizo evidente con la incomparecencia del **C. JUAN AGUILAR**, elemento de la Dirección de Seguridad Pública de Fresnillo, Zacatecas que, junto con **EVERARDO ANTONIO DE LEÓN** y **RODOLFO PINALES SARABIA** participó en la detención de **VD.**

69. Lo anterior, encuentra sustento en el siguiente criterio sustentado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, emitido en el caso Escher y otros Vs. Brasil:

> *"…corresponde a la parte demandante, en principio, la carga de la prueba de los hechos en que se funda su alegato; no obstante, se ha destacado que, a diferencia del derecho penal interno en los procesos sobre violaciones de derechos humanos, la defensa del Estado no puede descansar sobre la imposibilidad del demandante de allegar pruebas, cuando es el Estado quien tiene el control de los medios para aclarar hechos ocurridos dentro de su territorio"*.[53]

70. Entonces pues, la detención de **VD** a manos de los **CC. JUAN AGUILAR, EVERARDO ANTONIO DE LEÓN, RODOLFO PINALES SARABIA** y **JOSÉ ROLANDO NÚÑEZ**, elementos de la Dirección de Seguridad Pública de Fresnillo, Zacatecas, efectuada en fecha 03 de junio de 2019, se estima ilegal. Al no ajustarse en su aspecto material, a las causas, casos o circunstancias, establecidas previamente: como es el caso del cumplimiento de una orden de aprehensión o una orden de detención; o, en su defecto, derivada de controles provisionales preventivos debidamente justificados. Y, atendiendo a esto último, se considera que, toda vez que dichos controles provisionales no fueron efectuados conforme a la línea trazada por la Primera Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la detención de **VD** es ilegal, al no ceñirse a procedimientos objetivamente definidos, por lo que se advierte viciada en cuanto a su aspecto formal. Razón por la cual, se resuelve que los **CC. JUAN AGUILAR, EVERARDO ANTONIO DE LEÓN, RODOLFO PINALES SARABIA** y **JOSÉ ROLANDO NÚÑEZ**, son responsables de violentar el derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica de **VD**, al haber practicado sobre su persona, una detención ilegal. Contraviniendo así, las obligaciones de respeto, garantía y protección de sus derechos humanos, impuestas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

- <u>De la violación del derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica de **VD**, en relación con su derecho a no ser objeto de detenciones arbitrarias, atribuida al **LIC. FIDEL LUCIO ROJAS**, otrora Juez Calificador adscrito a la Dirección de Seguridad Pública de Fresnillo, Zacatecas, por hechos ocurridos el 3 de junio de 2019.</u>

71. En lo que respecta a la detención del quejoso este Organismo procede a analizar el actuar del **LIC. FIDEL LUCIO ROJAS**, entonces Juez Calificador adscrito a la Dirección de Seguridad Pública de Fresnillo, Zacatecas. Éste, fue claro en informar que el motivo por el cual **VD** fue detenido y posteriormente presentado ante él, lo fue la posesión de mariguana y cocaína; así como que, la sanción que le impuso fue una multa que ascendió a la cantidad de **$1000.00** (MIL PESOS 00/100 M.N). Para acreditar su dicho, remitió copia del libro de registro de detenidos de la Dirección de Seguridad Pública de Fresnillo, Zacatecas, del cual se desprende que el quejoso ingresó a las **14:04 horas** del 03 de junio de 2019 y obtuvo su libertad a las **17:46 horas**, tras pagar la referida multa. Esto es, **VD** permaneció interno por un lapso de **3 horas, con 42 minutos**, lo cual se estima contrario a lo dispuesto por el artículo 32 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas que, al efecto, dispone lo siguiente:

> *"…Compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por infracciones a los reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán en multa o arresto hasta por treinta y seis horas; pero si el infractor no*

53 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Escher y otros Vs. Brasil, sentencia de excepciones Preliminares, fondo, reparaciones y costas del 6 de julio de 2009, párr. 127."·

> *pagare la multa que se le hubiere impuesto, se permutará la pena pecuniaria por el arresto correspondiente, que no excederá en ningún caso de treinta y seis horas.* ***El arresto comenzará a computarse desde el momento mismo de la detención****. Quien efectúe la detención está obligado a poner al infractor a disposición de la autoridad competente dentro del término de tres horas y* ***ésta a su vez a fijar la sanción alternativa en un plazo no mayor de dos horas****…"* (Sic).

72. Lo anterior significa que, a partir de las **14:04 horas** del 03 de junio de 2019, en que **VD** fue puesto a su disposición, el **LIC. FIDEL LUCIO ROJAS**, entonces Juez Calificador adscrito a la Dirección de Seguridad Pública de Fresnillo, Zacatecas, tenía hasta las **16:04 horas** para imponerle la sanción correspondiente. Por el contrario, dicho plazo se vio excedido por **1 hora y 42 minutos**; lo cual implicó la violación del derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica del quejoso, al someterlo a una detención que no se ajustó en su aspecto formal a los procedimientos previamente establecidos; y, por ende, es susceptible de calificarse de arbitraria. Al no ajustarse el actuar del **LIC. FIDEL LUCIO ROJAS**, a los estándares internacionales de derechos humanos, que imponen a las autoridades de un Estado, la obligación de observar las garantías mínimas del debido proceso.

73. Garantías que, de acuerdo con los criterios sustentados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, son obligatorias no solo para autoridades jurisdiccionales, sino que, además, se extienden a autoridades administrativas, como es el caso, pues éstas, se refieren *al conjunto de requisitos que deben observarse en instancias procesales a efecto de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Es decir, cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea administrativo, sancionatorio o jurisdiccional, debe respetar el proceso legal.* De manera que, la amplitud en el desarrollo de este derecho se justifica también en la interpretación del Tribunal según la cual, las garantías del artículo 8.1 de la Convención superan los casos tradicionales de la jurisdicción penal, e incluso los procesos estrictamente judiciales.[54]

74. En ese sentido, cuando la Convención Americana sobre Derechos Humanos se refiere al derecho de toda persona a ser oída por un "juez o tribunal competente" para la "determinación de sus derechos", esta expresión hace alusión a cualquier autoridad pública, sea administrativa –colegiada o unipersonal–, legislativa o judicial, "que mediante sus resoluciones pueda determinar derechos y obligaciones de las personas", esto es, el referido artículo 8.1 de la Convención, no se aplica restrictivamente a jueces y tribunales judiciales", sino también a los que pese a no serlo formalmente, actúen como tal, y si bien a dichas autoridades no se les exigen garantías propias de un órgano jurisdiccional, éstas sí deben cumplir con las garantías necesarias para que su decisión no sea arbitraria.[55]

75. Se advierte entonces que, la actuación desplegada por órganos y autoridades con funciones de carácter materialmente jurisdiccional tiene límites infranqueables, entre los que, indudablemente, el respeto de los derechos humanos ocupa el nivel primordial, por lo que, en consecuencia, su actuación debe encontrarse debidamente regulada por la legislación interna de los Estados parte de la Convención, de manera precisa, para evitar cualquier arbitrariedad de su parte.[56]

76. Lo cual, a criterio de este Organismo Constitucional Autónomo, no fue atendido por el **LIC. FIDEL LUCIO ROJAS**, entonces Juez Calificador, adscrito a la Dirección de Seguridad Pública de Fresnillo, Zacatecas, quien, en fecha 03 de junio de 2019, conoció de la detención de **VD** y aplicó sanción consistente en multa, sin siquiera darle la oportunidad de realizar alguna manifestación en cuanto al motivo de su detención; cuando como ya se dijo, éste sostuvo que uno de los elementos policíacos era quien traía consigo las sustancias aparentemente encontradas tras su revisión. Por consiguiente, el funcionario privilegió la versión de los elementos captores y, en consecuencia, les concedió valor probatorio pleno, causando con ello una vulneración al derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica de **VD**, en relación con el derecho a no ser objeto de detenciones arbitrarias.

---

54 Steiner, Christian y otros, La Convención Americana sobre Derechos Humanos comentada, SCJN/Fundación Konrad Adenauer, Programa Estado de Derecho para América Latina, 2014, pág. 227.

55 Ídem, pág. 231.

56 Ídem, pág. 233.

77. Criterio que se respalda con el que, a su vez, sustentó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante la siguiente tesis aislada, con número de registro 238355:

> **AUDIENCIA Y SEGURIDAD JURÍDICA, GARANTÍAS DE. ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA DE BIENES O DERECHOS. DISTINCIÓN. ARTÍCULOS 14 Y 16 CONSTITUCIONALES.** En los términos del artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Federal, **la audiencia previa a la emisión del acto de autoridad y el debido proceso legal, como garantías del gobernado, son de observancia obligatoria únicamente tratándose de actos privativos**, sea de la vida, **de la libertad,** de propiedades, posesiones o derechos de los particulares más no así cuando se trata de actos de molestia que no tengan la finalidad de privar al afectado de alguno de sus bienes o derechos, pues tales actos se rigen solamente por la garantía de seguridad jurídica (fundamentación y motivación) que establece el artículo 16 constitucional.
>
> Las negritas, son de esta Comisión.

78. En ese entendido, esta Institución resuelve que, el **LIC. FIDEL LUCIO ROJAS**, entonces Juez Calificador, adscrito a la Dirección de Seguridad Pública, de Fresnillo, Zacatecas, es responsable del quebranto a la esfera de derechos fundamentales de **VD**, al no cumplir con las obligaciones de garantía, protección y defensa de éstos, en estricto apego a lo dispuesto por el artículo 1°, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con los instrumentos internacionales invocados en el presente acuerdo, así como con los criterios sustentados por los Tribunales Internacionales aludidos y, con el de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, vulnerando en su perjuicio, su derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica, en relación con su derecho a no ser objeto de detenciones arbitrarias.

79. Pero, además de ello, este Organismo toma nota del actuar ilegal del **LIC. FIDEL LUCIO ROJAS**, entonces Juez Calificador, adscrito a la Dirección de Seguridad Pública, de Fresnillo, Zacatecas, al calificar como falta administrativa una conducta que, según se desprende de la investigación realizada, podría constituir un hecho que la ley señala como delito. Esto, atendiendo a su propia narrativa, en la cual indicó puntualmente que, el quejoso, fue puesto a disposición por encontrársele en posesión de mariguana y cocaína. Afirmación que, como ya se dijo previamente, se asentó también en el libro de registro de detenidos de la corporación, en el que aparece precisamente como causa de detención de **VD**: posesión ilegal de mariguana y cocaína.

80. Entonces pues, se deduce el reconocimiento tácito de la autoridad, de haber actuado ilegalmente, sancionando una conducta que no implicaba una falta administrativa, sino un delito y; por ende, invadiendo la esfera de competencia del Ministerio Público Federal. Al respecto, cabe recordar que, la referida Ley de Justicia Comunitaria a través del texto del artículo 42, impone a los Jueces Comunitarios, la obligación de remitir al Ministerio Público los hechos de que tenga conocimiento con motivo de sus funciones y que puedan constituir delito, poniendo a su disposición al detenido, y objetos asegurados, en forma inmediata. Aunado a ello, el Código Municipal Reglamentario de Fresnillo, Zacatecas, preceptúa en su numeral 548, relativa a la función calificadora y conciliadora que, los Alcaides, podrán conciliar a los ciudadanos, entre otros casos, en conflictos que no sean constitutivos de delito.

81. Correlativo a ello, el artículo 77 de dicho ordenamiento jurídico, en coincidencia con el diverso 132 del Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Fresnillo, Zacatecas, disponen que, toda persona que sea detenida por la comisión de delitos flagrantes deberá ser consignada sin demora alguna ante el Ministerio Público. Esto último, desde luego, sin perjuicio de que la propia autoridad administrativa imponga, sí así lo estima procedente, las sanciones administrativas conducentes. Asimismo, el referido Bando Municipal establece que, si luego de tomar conocimiento de los hechos, la autoridad calificadora estima que se está ante la presencia de un delito, turnará inmediatamente el asunto ante el Ministerio Público investigador. Lo cual, hará también con el detenido o detenidos y con los objetos que se le hubieren presentado y que tengan relación con los hechos; requisito que, en el caso de la presente Recomendación, fue ignorado totalmente por el **LIC. FIDEL LUCIO**

ROJAS, entonces Juez Calificador, adscrito a la Dirección de Seguridad Pública, de Fresnillo, Zacatecas.

82. La omisión del **LIC. FIDEL LUCIO ROJAS**, entonces Juez Calificador, adscrito a la Dirección de Seguridad Pública, de Fresnillo, Zacatecas, es contraria además a las disposiciones del Código Penal Federal, en relación con la Ley General de Salud, aplicables en materia de estupefacientes. El citado Código Sustantivo prevé en su artículo 193 que se consideran narcóticos a los estupefacientes, psicotrópicos y demás sustancias o vegetales que determinen la Ley General de Salud, los convenios y tratados internacionales de observancia obligatoria en México y los que señalen las demás disposiciones legales aplicables en la materia. Motivo por el cual, son punibles las conductas que se relacionan con los estupefacientes, psicotrópicos y demás sustancias previstas en los artículos 237, 245, fracciones I, II, y III y 248 de la Ley General de Salud, que constituyen un problema grave para la salud pública.

83. En relación con esto último, la señalada Ley General de Salud, enumera en su artículo 234, como estupefacientes, entre otros: **la cocaína y el cannabis**; sustancias que, a decir de la autoridad, poseía **VD** en el momento de su detención. Posesión que, de conformidad con lo estatuido con el numeral 235 de dicha Ley, queda sujeto al conocimiento del Ministerio Público para que, en cada caso concreto, determine lo legalmente conducente. Atendiendo para ello, además, las disposiciones del numeral 237 de dicho cuerpo normativo, que prohíbe todo acto de siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte en cualquier forma, prescripción médica, suministro, empleo, uso, consumo y, en general, con relación a las sustancias señaladas en el referido artículo 234; entre las que se incluyen, como ya se indicó, **la cocaína y el cannabis.**

84. Sin embargo, como el propio **LIC. FIDEL LUCIO ROJAS**, entonces Juez Calificador, adscrito a la Dirección de Seguridad Pública, de Fresnillo, Zacatecas reconoció, en una clara actuación ilegal, sancionó la conducta atribuida por los elementos captores a **VD**. Aplicando una sanción consistente en multa, de la cual, además, debe decirse, no se tiene la certeza que haya realizado de manera correcta, puesto que el exfuncionario no aportó copia del correspondiente recibo fiscal. Situación que, la Presidencia Municipal de Fresnillo, Zacatecas, deberá dilucidar, atendiendo a que, de no existir dicho recibo, muy probablemente, el cobro se realizó sin que haya sido ingresado a las arcas de la Hacienda Municipal. Empero, el hecho en sí, de que eventualmente no ingresara dicho dinero a la Administración, no implica la vulneración de derecho humano alguno, por lo que este Organismo no se pronuncia al respecto. Sino que meramente se señala, a efecto de que si así se estima pertinente, la Administración Municipal, realice el procedimiento de administración correspondiente.

85. Luego entonces, la omisión del **LIC. FIDEL LUCIO ROJAS**, entonces Juez Calificador, adscrito a la Dirección de Seguridad Pública, de Fresnillo, Zacatecas, de poner en conocimiento del Ministerio Público de la Federación, los hechos que motivan esta Recomendación, es totalmente irregular. De tal suerte que, este Organismo, resuelve que, con dicha omisión, y con el cobro ilegal de una multa, se sancionó un hecho que la ley señala como delito. Der modo tal que, se afectó el debido proceso en agravio de **VD**, con la consecuente vulneración de su derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica, vulneración que, en el caso concreto, se manifestó en su detención arbitraria. Detención atribuible de manera directa al actuar omisivo e ilegal del **LIC. FIDEL LUCIO ROJAS**, entonces Juez Calificador, adscrito a la Dirección de Seguridad Pública, de Fresnillo, Zacatecas. Transgrediendo con ello, las obligaciones de respeto, garantía y protección de sus derechos humanos, impuestas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

- Del acuerdo de No Responsabilidad de los elementos de la Dirección de Seguridad Pública de Fresnillo, Zacatecas, por hechos ocurridos el 04 de junio de 2019.

86. Como se advirtió previamente, por técnica jurídica, en el presente apartado se analizan los hechos que el quejoso atribuyó a elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, acaecidos en fecha 04 de junio de 2019. Específicamente, lo relativo a que,

mientras transitaba a la altura de la empresa Peñoles, frente a la colonia Minera de esta ciudad de Fresnillo, Zacatecas; advirtió la unidad número […] de la Policía Municipal de Fresnillo, Zacatecas, la cual era abordada por los elementos **JUAN AGUILAR** y **JOSÉ ROLANDO NÚÑEZ**. Quienes le indicaron que bajara de su motocicleta, por lo que luego de obedecer dicha indicación, éste último le cuestiona si trae dinero, además de "esculcarlo"; por lo que cuando le dijo que no tenía dinero, ambos le mencionaron de manera textual: *"estamos entrados, por si dices algo"*. Asimismo, el quejoso afirmó que el mismo oficial le pidió su teléfono celular, que se alejó unos metros y al parecer realizó una llamada; y, finalmente, le dijo a su compañero que ya se fueran, advirtiéndole a él que, si decía algo, le iría mal.

87. Al respecto, de la información proporcionada por la Dirección de Seguridad Pública de Fresnillo, Zacatecas, específicamente del informe remitido por el **SUBOFICIAL LUIS ANTONIO ESTRADA HERNÁNDEZ**, en ese entonces Director de la corporación, se desprende que, en esa fecha elementos a bordo de la mencionada unidad […] efectivamente realizaron revisión corporal de **VD.** Dicha revisión, se justificó por el hecho de que, por parte de la Policía Metropolitana del Estado de Zacatecas, se solicitó apoyo, debido a que, se detectó la presencia de un vehículo *Scape*, de color gris que entraba a la ciudad con alta velocidad; esto, sobre la Calzada del Minero. Motivo por el cual, al identificar un vehículo con tales características, se le marcó el alto y al no encontrar nada ilícito, se prosiguió con el seguimiento de dicho reporte, siendo importante mencionar que, en dicho oficio, se indicó que el conductor era **VD.** Mientras que, con posterioridad, se precisó que los elementos que abordaban la unidad en mención son: **LUIS EDUARDO BRETADO CAMARILLO, JESÚS ESPARZA GONZÁLEZ, TOMÁS SAID GARCÍA GARCÍA** y **FERNANDO DOMÍNGUEZ CASTAÑEDA.**

88. En lo atinente, este Organismo no pudo recabar el testimonio del oficial **LUIS EDUARDO BRETADO CAMARILLO**, debido a que cuando se le requirió, se encontraba gozando de licencia sin goce de sueldo. Mientras que, los **CC. TOMÁS SAÍD GARCÍA GARCÍA, JESÚS ESPARZA GONZÁLEZ** y **FERNANDO DOMÍNGUEZ CASTAÑEDA**, coincidieron con la información proporcionada por el ex Director, en el sentido de que previo a la revisión corporal de **VD**, se había recibido un reporte relacionado con la entrada al Municipio, de un vehículo sospechoso. Asimismo, los 3 uniformados coincidieron en que, al dirigirse a la Calzada Proaño para atender dicho reporte, tuvieron a la vista a **VD**, quien abordaba una motocicleta; y no una camioneta, como aseguró su ex Director. De la misma manera, todos fueron coincidentes en manifestar que **VD** conducía la motocicleta sin las luces delanteras y traseras encendidas; motivo por el cual, se le cuestionó sobre ello, así como, sobre el motivo por el cual conducía a alta velocidad. Igualmente, los elementos también concordaron en manifestar que, solamente se entrevistó a **VD**, esto es, en ningún momento se le realizó una revisión corporal, como afirmó el **SUBOFICIAL LUIS ANTONIO ESTRADA HERNÁNDEZ**. Por último, los **CC. TOMÁS SAÍD GARCÍA GARCÍA, JESÚS ESPARZA GONZÁLEZ** y **FERNANDO DOMÍNGUEZ CASTAÑEDA**, negaron la participación de **JUAN AGUILAR** y **JOSÉ ROLANDO NÚÑEZ** en los hechos.

89. En lo atinente, este Organismo nota una versión totalmente discordante entre el dicho del quejoso y el de la autoridad; empero, a pesar de la contradicción entre los **CC. TOMÁS SAÍD GARCÍA GARCÍA, JESÚS ESPARZA GONZÁLEZ** y **FERNANDO DOMÍNGUEZ CASTAÑEDA** y el **SUBOFICIAL LUIS ANTONIO ESTRADA HERNÁNDEZ**, quien en ese entonces fungía como su Director, se advierte que la actuación de los elementos, fue la adecuada. Ya que, si se retoma el criterio sustentado por la Primera Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya establecido con anterioridad, se tiene que éstos, efectuaron un control provisional preventivo en grado menor. Lo cual, implicó sí, la interrupción momentánea de su libertad personal, específicamente deambulatoria, pero no afectó su derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica, en relación con su derecho a no ser objeto de detenciones arbitrarias.

90. Por lo cual, no debe interpretarse de ningún modo como contradictorio en la línea argumentativa de la presente Recomendación, pues en el caso concreto, como se dijo previamente, deben analizarse las circunstancias fácticas de los hechos y de las personas involucradas. Por lo tanto, dada la facultad de los **CC. TOMÁS SAÍD GARCÍA GARCÍA,**

JESÚS ESPARZA GONZÁLEZ y **FERNANDO DOMÍNGUEZ CASTAÑEDA** y el **SUBOFICIAL LUIS ANTONIO ESTRADA HERNÁNDEZ**, elementos de la Dirección de Seguridad Pública de Fresnillo, Zacatecas, para prevenir delitos de acuerdo al marco constitucional vigente; se resuelve que, aun en ausencia de documentación que acredite que fueron asignados para atender el reporte que refirieron, como se exigió en los hechos del 3 de junio de 2019, este no incurrieron en alguna conducta que implicara la vulneración de los derechos humanos del quejoso. Además de que, con su testimonio, se desvirtúa por completo la versión del quejoso, en cuanto a la participación de los elementos **JUAN AGUILAR** y **JOSÉ ROLANDO NÚÑEZ**. En consecuencia, con fundamento en los artículos 51 y 52 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, se dicta en su favor, el correspondiente **Acuerdo de No Responsabilidad.**

B. Derecho a la integridad y seguridad personal, en relación con el derecho a la integridad física y psicológica.

91. Desde el punto de vista gramatical, por integridad se entiende *"calidad de íntegro"*[57], y la voz "íntegra", se define como *"que no carece de ninguna de sus partes".* Ahora bien, entre las diversas acepciones de la palabra personal, se puede encontrar la de "*perteneciente o relativo a la persona"*[58]*.* De tal suerte que, la integridad personal, pude verse como la calidad de la persona que le permite gozar o disfrutar de todas sus partes o, en otras palabras, de todo su ser[59].

92. Por otro lado, en el ámbito doctrinal, normativo y jurisprudencial es posible encontrar algunos pronunciamientos tendentes a conceptuar el derecho a la integridad personal. Por ejemplo, Reyes Vanegas refiere que es *"el conjunto de condiciones que permiten que una persona pueda gozar de su vida, con la plenitud de las funciones orgánicas y psíquicas"* que le son propias.[60] Mientras que, Solórzano Betancourt ha sostenido que *"el derecho a la integridad personal implica el reconocimiento de la dignidad inherente al ser humano y, por lo tanto, de la preservación física, psíquica y moral de toda persona, lo cual se traduce en el derecho a no ser víctima de ningún dolor o sufrimiento físico, psicológico o moral".*[61]

93. En ese entendido, se puede afirmar que, para garantizar el derecho a la integridad personal, las autoridades tienen la obligación de respetar las condiciones físicas, psicológicas, sexuales y morales que permiten el desarrollo de las personas, así como el deber de no someter a nadie a tortura o cualquier otro trato cruel, inhumano o degradante. Es decir, el derecho a la integridad personal implica que nadie puede ser lesionado o agredido física, psicológica o mentalmente, pues al estar la integridad personal directamente vinculada con la dignidad humana, las formas de afectación son variadas y muchas de ellas no tan evidentes como lo son las formas más agravadas de violación de este derecho[62], motivo por el cual, los Estados deben proteger a sus gobernados contra tales afectaciones.

94. En el marco normativo del Sistema Universal de Protección a los Derechos Humanos, el derecho a la integridad personal se establece en los artículos 3 y 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, así mismo, en los artículos 7 y 10 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y, en el artículo 2 de la Declaración sobre la protección de todas las formas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Preceptos en los que, de manera similar, se establece que todas las personas tienen derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral y que, en correspondencia, nadie debe ser sometido a torturas ni penas, o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

95. A ese respecto, el Comité de Derechos Humanos, el cual supervisa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su Observación General 20, de 10 de

---

57 Real Academia Española, "Integridad", op. cit., t.II, h/z, pág. 1288.

58 Ibid, "Personal", pág. 1739.

59 Se ha establecido que dado que en el lenguaje coloquial, la voz "integridad" se emplea para designar la cualidad de íntegro, es decir, el carácter de aquello a lo que no le falta ninguna de sus partes, puede decirse que la integridad personal se refiere a la incolumidad de la persona, entendida como "el estado o condición de incólume", término este último entre cuyas acepciones se encuentra la de "sano, sin lesión ni menoscabo". Cfr. Arocena, Gustavo Alberto, Ataques a la integridad sexual, Buenos Aires, Argentina, Astrea, 2012, pág. 5; y Reynoso Dávila, Roberto, Delitos contra la vida y la integridad corporal, México, Porrúa, 1997, pág. 36.

60 REYES V., Alejandra, *Derecho a la integridad*, Bogotá, Defensoría del Pueblo, 2001, pág. 17

61 Solórzano B., Mario Alberto, *El Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal en materia de derecho a la integridad, a la libertad y a la seguridad personales.* Folleto de Divulgación para la vigilancia social, México, Solar, 2010, pág. 3.

62 Ídem.

marzo de 1992, dispuso que el derecho a la integridad personal protege a los individuos de daños físicos o mentales provocados o que puedan ser ocasionados por una multiplicidad de acciones y omisiones tanto de las autoridades que hagan uso de sus potestades públicas, de las autoridades que no se encuentren investidas en ese momento de su cargo público, así como de los actos de entes particulares.

96. Análogamente, el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, preceptúa en su artículo 5 que: *"Ningún funcionario encargado de hacer cumplir la ley podrá infligir, instigar o tolerar ningún acto de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni invocar la orden de un superior o circunstancias especiales, como estado de guerra o amenaza de guerra, amenaza a la seguridad nacional, inestabilidad política interna, o cualquier otra emergencia pública, como justificación de la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes."* Análogamente, los principios 1 y 6, del Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o de prisión, estatuyen la obligación de respeto a la dignidad humana, y la consecuente prohibición de actos de tortura, u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes[63].

97. Dicha prohibición, sobreviene de la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, aprobada por la Asamblea General de la ONU, y en la que se estipula que: *"Todo acto de esa naturaleza, constituye una ofensa a la dignidad humana y será condenado como violación de los propósitos de la Carta de las Naciones Unidas y de los derechos humanos y libertades fundamentales proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales de derechos humanos."*

98. Mientras tanto, en el Sistema Interamericano de derechos humanos, el derecho a la integridad personal se encuentra estipulado en el mismo sentido, en los artículos 1 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en donde señala que: *"Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona".* Asimismo, el artículo 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, párrafo primero, señala que: "*Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica o moral"*.

99. De su lado, la Corte Interamericana ha señalado *que la infracción del derecho a la integridad física y psíquica de las personas es una clase de violación que tiene diversas connotaciones de grado y que abarca desde la tortura hasta otro tipo de vejaciones o tratos crueles, inhumanos o degradantes cuyas secuelas físicas y psíquicas varían de intensidad según los factores endógenos y exógenos que deberán ser demostrados en cada situación concreta.*[64]

100. En el ámbito interno, el artículo 1°, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, ordena la prohibición de todo tipo de acto que atente contra la dignidad humana, y que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. A su vez, el artículo 16, párrafo primero, 19, párrafo séptimo, y 22, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconocen que todas las personas son titulares de los derechos reconocidos en los tratados internacionales de derechos humanos en los que el Estado Mexicano sea parte, y el derecho de toda persona a ser tratada humanamente y con el debido respeto a la dignidad inherente al ser humano, lo cual incluye el deber de los servidores públicos de salvaguardar su integridad personal.

101. En esa lógica, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha asumido, de manera reiterada, el criterio de que *"el derecho a la integridad personal es aquél que tiene todo sujeto para no sufrir tratos que afecten su estructura corporal, sea física, fisiológica o psicológica, o cualquier otra alteración en el organismo que deje huella temporal o*

---

63 Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o de prisión. Principio 1. Toda persona sometida a cualquier forma de detención o prisión será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano; Principio 6. Ninguna persona sometida a cualquier forma de detención o prisión será sometida a tortura o a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. No podrá invocarse circunstancia alguna como justificación de la tortura o de otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

64 Corte IDH. Caso *Loayza Tamayo vs. Perú*, Sentencia de Fondo. 17 de septiembre de 2007, párr. 57.

permanente, que cause dolor o sufrimiento grave con motivo de la injerencia o actividad dolosa o culposa de un tercero."[65]

102. Luego entonces, según lo estipula el cúmulo de instrumentos antedichos, toda persona privada de su libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano; y los Estados tienen la obligación de tomar medidas efectivas para prevenir, investigar y sancionar la comisión de cualquier acto que lesione su dignidad humana o su integridad física, moral o psicológica.

103. En vista de lo anterior, este Organismo Autónomo estima conveniente señalar qué se entiende por dignidad humana. Partiendo del significado etimológico, el término *dignidad,* proviene del latín *dignitas*, cuya raíz es *dignus*, que significa "excelencia", "grandeza"[66]; por lo que entonces, es posible colegir que, la dignidad que posee cada individuo es un valor intrínseco, puesto que no depende de factores externos. De esta manera, el término dignidad no sólo significa *grandeza* y *excelencia*, es decir, el portador de esta cualidad no sólo se distingue y destaca entre los demás, sino también denota un merecimiento a un cierto tipo de trato. Por consiguiente, la dignidad se puede definir como *"la excelencia que merece respeto o estima"*[67]*.*

104. Así pues, la dignidad puede concebirse como aquel valor inalterable que posee toda persona por el hecho de contar con capacidad para razonar y decidir, lo que hace posible concluir que, los seres humanos somos iguales en la medida en que todos somos portadores de una dignidad común, y por encima de todas las diferencias que nos individualizan y nos distinguen unos de los otros, es decir, todo ser humano[68] posee dignidad sin importar la condición en que se encuentre.

105. Relativo a ello, Jesús González Pérez sostiene que: *"la dignidad es el rango o la categoría que corresponde al hombre como ser dotado de inteligencia y libertad, distinto y superior a todo lo creado, y que comparte un tratamiento concorde a todo momento con la naturaleza humana"*[69]. Por lo que, en ese sentido, la dignidad humana se encuentra dentro del ser de cada persona, surge en el preciso momento en que ésta empieza a existir y se convierte en parte de los valores morales del ser humano[70].

106. En ese contexto, es posible inferir que, en el contexto de los derechos humanos, la dignidad humana, es la que posee el hombre al momento en que inicia su desarrollo vital, consolidándose al convertirse en persona. "*De ahí que corresponda a todo ser humano y sea exclusiva del mismo, traducida en la capacidad de decidir libre y racionalmente cualquier modelo de conducta, con la consecuente exigencia de respeto por parte de los demás"*[71].

107. De modo tal que, la integridad y seguridad personal, íntimamente ligada a la dignidad humana, fundamento de los derechos humanos, constituye un bien jurídico tutelado por los diversos ordenamientos jurídicos aludidos en los párrafos que anteceden; es por eso, que se encuentran proscritos actos denigrantes como la tortura, y otros tratos y penas crueles, inhumanas o degradantes.

108. Consecuentemente, el derecho a la integridad personal no sólo implica para los Estados la obligación de respetarlo (obligación negativa), sino que, además, requiere que se adopten todas las medidas apropiadas para garantizarlo (obligación positiva), en cumplimiento de su deber general establecido en el art. 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El reconocimiento del respeto a la integridad personal, así como las prohibiciones allí enumeradas, buscan proteger la dignidad inherente al ser humano, y por este motivo, se ha reconocido que la amplitud de situaciones en que este derecho particular podría ser vulnerado va más allá de las prohibiciones establecidas en el art. 5 de la Convención Americana.

---

65 CNDH Recomendación 69/2016 de fecha 28 de diciembre de 2016, párr. 135 y Recomendación 71/2016 del 30 de diciembre de 2016, párr. 111.

66 Consúltese la página web: http://www.rae.es.

67 THOMAS W., *Fundamentos de los Derechos del Hombre y el Principio Rector del Bien Común*, en la página web http://www.catolicos.com/socialdoc12.htm

68 SÁNCHEZ B., Enrique, *Derecho Constitucional*, 4ª edición, México, Porrúa, 1999, pág. 2.

69 GONZÁLEZ P., Jesús, *op. cit.*, pág. 81.

70 GARCÍA G., Aristeo, *La Dignidad Humana: Núcleo Duro de los Derechos Humanos*, en: http://www.unla.mx/iusunla28/reflexion/La%20Dignidad%20Humana.htm#_ftn11

71 Ídem.

109. Se deduce entonces que, los instrumentos internacionales, se limitan a establecer la prohibición de diferentes formas en que se puede afectar la integridad personal, siendo éstas la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes. Y lo mismo sucede en el Sistema Interamericano, pues en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, se ha reconocido el derecho a un tratamiento humano durante la privación de la libertad, y en concordancia, se establece la prohibición de imponer penas crueles, infamantes e inusitadas[72].

110. En tal virtud, este Organismo procederá a analizar por separado, el quebrantamiento del derecho a la integridad física y psicológica, sufrida por **VD**. Para tal efecto, es viable establecer que, la Organización Mundial de la Salud señala que lesión es *"toda alteración del equilibrio biopsicosocial"*[73]*.* Clínicamente, una lesión es un cambio anormal en la morfología o estructura de una parte del cuerpo producida por un daño externo o interno. En ese sentido, el Código Penal para el Estado de Zacatecas tipifica el delito de lesiones como *todo daño en el cuerpo de alguien o en cualquiera alteración de la salud, producida por una causa externa imputable a una persona*[74]*.* Mientras que, el Código Penal para el Estado de Zacatecas, contempla el tipo penal de lesiones en su artículo 285, al especificar que, "*la lesión consiste en todo daño en el cuerpo de alguien o en cualquiera alteración de la salud, producida por una causa externa imputable a una persona…"*.

- De la violación del derecho a la integridad y seguridad personal de **VD**, en relación con su derecho a la integridad física, atribuida a elementos de la Dirección de Seguridad Pública de Fresnillo, Zacatecas, así como al **DR. LUIS ANTONIO DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ,** médico adscrito a dicha Corporación, por hechos ocurridos el 3 de junio de 2019.

111. En el caso que nos ocupa, **VD** detalló que, al momento que el **C. JOSÉ ROLANDO NÚÑEZ**, elemento de la corporación en comento, le colocó las esposas, se las apretó bastante; asimismo, acusó al mismo elemento de haberlo aplastado con sus pies cuando ya se encontraba arriba de la unidad oficial. Por otro lado, el quejoso explicó que una vez que arribaron a las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública de Fresnillo, Zacatecas, el oficial **JUAN AGUILAR** comenzó a golpearlo con un bat de fierro, recibiendo el primer golpe en el estómago, del lado derecho y luego en el resto de su cuerpo. Asimismo, acusó al agente **JOSÉ ROLANDO NÚÑEZ** de sujetarlo mientras el agente **JUAN AGUILAR** le propinaba patadas en diversas partes de su cuerpo.

112. Aunado a ello, relató que dicho oficial le provocó varios piquetes chiquitos en su cabeza, del lado derecho, llegando incluso a arrancarle cabellos; mientras que **JOSÉ ROLANDO NÚÑEZ** le produjo piquetes entre el dedo pulgar y la uña de su mano izquierda. Por otro lado, aseguró que el elemento **JUAN AGUILAR** le colocó una bolsa en la cabeza y luego sintió una chicharra, ya que también sintió toques en la cara, de ambos lados, así como en la columna. Finalmente, el quejoso afirmó que este elemento, le advirtió que no debía decir nada sobre dichos golpes al médico que lo certificara; mismo que el quejoso identificó como **LUIS FERNANDO JIMÉNEZ**. Aunque cabe mencionar que este Organismo logró acreditar que dicha persona nunca ha sido trabajadora de la corporación y que, quien realmente lo certificó, fue el **DR. LUIS ANTONIO DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ.**

113. Este último, documentó que, al revisar al quejoso a las **14:15** horas del día **3 de junio de 2021**, presentó un estado de conciencia letárgico, distrofia en su articulación de palabras, marcha atáxica, reflejos pupilares y musculares disminuidos; así como aliento a cannabis y, no presentaba lesiones. Por otro lado, en entrevista sostenida con esta Comisión, el referido servidor público detalló de nueva cuenta el contenido del certificado médico expedido y reiteró que al momento de explorar a **VD** éste no presentaba lesiones visibles; además de que no manifestó dolor o molestia en alguna parte del cuerpo. Finalmente, el galeno manifestó que siempre que atiendo a un detenido, nunca pregunta el motivo de dicha detención, ni tampoco se involucra en los trámites de los elementos policíacos, por lo que

72 Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, art. XXV y XXVI.

73 Obtenido de: http://www.salud180.com/salud-z/lesion.

74 Código Penal para el Estado de Zacatecas, art. 258.

solo se limita a realizar certificaciones y a brindar atención médica cuando se requiere. Mientras que, por su parte, los elementos **EVERARDO ANTONIO DE LEÓN** y **RODOLFO PINALES SARABIA** negaron haber presenciado agresiones físicas en contra del quejoso, causadas por sus compañeros **JOSÉ ROLANDO NÚÑEZ** o **JUAN AGUILAR**, así como que ellos mismos las hubieren ocasionado.

114. Sin embargo, del certificado médico practicado a **VD** por la **DRA. ISELA JANET ORTEGA GÓMEZ**, Médica Legista adscrita al Departamento de Medicina Legal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, solo **2 días después de su detención**, se desprende que éste sí presentaba lesiones. Mismas que, por su ubicación, coinciden con su narrativa de los hechos; como es el caso de la herida cortante, localizada en su región parietal derecha; la cual, concuerda con su manifestación de que el elemento **JUAN AGUILAR** lo lesionó con una navaja. Asimismo, presentó una equimosis en color morado en su flanco derecho y una equimosis en color morado en el lado izquierdo del tórax, las cuales, resultan concurrentes con su narrativa de los hechos, cuando asegura que recibió diversos golpes con un bat, propinados por este mismo elemento, mientras era sostenido por el elemento **JOSÉ ROLANDO NÚÑEZ.**

115. En tal virtud, este Organismo encuentra que sí existe un nexo causal entre el relato de la parte quejosa, que ubica a los elementos de la Dirección de Seguridad Pública de Fresnillo, Zacatecas, obviamente en el momento de ser detenido, siendo agredido por éstos, y el resultado de las lesiones documentadas por la **DRA. ISELA JANET ORTEGA GÓMEZ**, Médica Legista adscrita al Departamento de Medicina Legal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas.

116. Ligamen que permite concluir que **VD** sufrió el trastocamiento del derecho a la integridad y seguridad personal, específicamente en lo que a su integridad física se refiere, atribuible de manera directa a los elementos **JUAN AGUILAR** y **JOSÉ ROLANDO NÚÑEZ**, por ser aquellos que provocaron de manera directa las lesiones documentadas por la referida Médica Legista. Y, de manera indirecta por los elementos **EVERARDO ANTONIO DE LEÓN** y **RODOLFO PINALES SARABIA**, por no evitar que los primeros causaran dichas lesiones y, además, por omitir notificar los hechos, por lo menos, a sus superiores jerárquicos. Actuar que se estima diametralmente contrario a las obligaciones de protección, defensa y garantía de los derechos humanos, reconocidos por el parámetro de regularidad constitucional, que dota de sustento jurídico a la presente Recomendación.

117. Aunado a ello, este Organismo considera que el **DR. LUIS ANTONIO DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ**, actuó de forma omisiva al momento de certificar clínicamente a **VD** en fecha 03 de junio de 2019, puesto que, a más de documentar su condición, derivada del posible consumo de mariguana; realmente no se denota que realizara una adecuada exploración física; cómo sí lo hizo la **DRA. ISELA JANET ORTEGA GÓMEZ**, Médica Legista adscrita al Departamento de Medicina Legal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas. Lo anterior, se desprende de su propia narrativa, al momento de explicar que el detenido no presentaba **lesiones visibles**; es decir, se limitó a tratar de documentar lesiones que fueran percibidas a simple vista. Lo cual, se deduce por el hecho de que no especificó si **VD** se negó a una exploración física más profunda, como sí sucedió con la **DRA. ISELA JANET ORTEGA GÓMEZ**, quien como ya se dijo, encontró lesiones en el tórax y en la cabeza.

118. Bajo ese entendido, no basta con que el galeno sostenga que, durante sus certificaciones, no se involucra en trámites, sino que meramente se limita a realizar tales certificaciones y a brindar atención médica cuando así se requiere. Empero, en el caso concreto, se aprecia que, como ya se apuntó, se limitó a documentar la condición de **VD** derivada de su posible intoxicación, sin prestar mayor atención a su condición de salud física, de manera integral. Omisión que es totalmente contraria al contenido del Principio 1 de los Principios de ética médica aplicables a la función del personal de salud, especialmente los médicos, en la protección de personas presas y detenidas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes que imponen a los médicos la obligación de brindar **protección a la salud física y mental de dichas personas** y de tratar sus enfermedades al mismo nivel de calidad que brindan a las personas que no están presas o detenidas.

119. De modo tal que, en el presente caso, este Organismo encuentra responsable al **DR. LUIS ANTONIO DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ**, médico adscrito a la Dirección de Seguridad Pública de Fresnillo, Zacatecas, de violentar el derecho a la integridad y seguridad personal de **VD**, por la omisión de certificar debidamente su integridad física, lo que se traduce en un quebranto de ésta. Por tal motivo, la Presidencia Municipal de Fresnillo, Zacatecas, deberá implementar medidas tendentes a abatir la práctica, reconocida expresamente por el **DR. LUIS ANTONIO DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ**, de solamente observar a las personas detenidas para determinar si presentan lesiones. Por lo que, bajo consentimiento informado, deberá realizar certificaciones médicas más rigurosas, a efecto de identificar si realmente las personas detenidas y a las que les practica certificación médica, presentan o no lesiones.

C. Derecho a la propiedad y a la posesión.

120. El derecho a la propiedad consiste en el derecho inherente a toda persona, de usar, gozar, disfrutar y disponer de sus bienes de acuerdo con la ley. Por lo tanto, dicho derecho, al igual que todos los derechos humanos, debe ser protegido por el Estado, lo que implica que nadie pueda ser privado, ni molestado en sus a bienes sino en virtud de un juicio que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento; en consecuencia, sólo en caso de interés público, y observando la debida indemnización, el Estado puede restringir el derecho a usar, disfrutar y disponer de ella. De este modo, el respeto a dicho derecho humano está íntimamente relacionado con la posibilidad de que cada persona pueda realizar y llevar a cabo su plan de vida, sin coacción o interrupción de terceros.[75]

121. Luego entonces, el derecho a la propiedad se considera un derecho fundamental, pues este se encamina a lograr que los sujetos tengan el medio para alcanzar su plan de vida sin que se involucre en el tema cuantitativo (costos), ahora bien, es preciso destacar que este derecho humano en la medida en que se garantice, proporciona a todas las personas la oportunidad de poder alcanzar sus metas de vida planteadas sin injerencias arbitrarias de terceros, empero, no significa que necesariamente todos lleguen a hacerlo, en otras palabras, el derecho a la propiedad no debe de tomarse como una garantía, sino como un medio.

122. En suma, el derecho humano a la propiedad se traduce dos aspectos, el primero bajo la premisa de que cada sujeto tiene derecho al producto de sus acciones, es decir *"quien toma una fruta de un árbol silvestre antes que otro tiene el derecho de propiedad sobre esta"*, de igual forma*, "quien trabaja la tierra tiene el derecho a sus frutos y a ella"*. Mientras que, el segundo de los aspectos, implica que los sujetos al tener un derecho de propiedad sobre sus bienes y este al ser legítimo, impide que cualquier otra persona e inclusive el estado pueda disponer de él sin que se justifique y se indemnice, incluyendo también el pago de las consecuencias que pudiera traer. [76]

123. Por otro lado, tenemos que, los "bienes" pueden ser definidos como aquellas cosas materiales apropiables, así como todo derecho que pueda formar parte del patrimonio de una persona; dicho concepto comprende todos los muebles e inmuebles, los elementos corporales e incorporales y cualquier otro objeto inmaterial susceptible de tener un valor[77]. Es pues el derecho a la propiedad, aquél que tiene toda persona de usar, gozar, disfrutar y disponer los bienes que le sean propios, de acuerdo con las disposiciones de ley.

124. En tanto que el dinero es concebido como un bien mueble denominado en referencia a una unidad de cuenta, que se materializa billetes y monedas para fungir como medida de valor, reserva de valor y medio general de cambio, cuya emisión se efectúa conforme al orden jurídico de un Estado determinado, que le confiere curso legal, tanto en su ámbito espacial, como temporal de validez[78]. Al ser un bien mueble, en tanto que es una cosa susceptible de apropiación que puede trasladarse de un lado a otro, el dinero forma pues, parte del patrimonio de una persona.

---

75 Consultado en: http://www.mexicanconsulting.com/derecho-humano-la-propiedad/

76 Ídem.

77 Caso Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua, Sentencia del 31 de agosto de 2001, Serie C, Núm. 79, párr. 144.

78 "El dinero", Colegio de Notarios del Distrito Federal, 2004, pág. 11-12.

125. En el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se ha pronunciado respecto del derecho a la propiedad, y distingue dos modalidades, a saber: como derecho inalienable de toda persona a contar con propiedades individuales, y como derecho frente a terceros, a no ser privado arbitrariamente de su propiedad[79].

126. Mientras tanto, en el Sistema Interamericano, el derecho a la propiedad se contempla en el artículo 21 del Pacto de San José[80], que establece que toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes, derecho que solo se puede subordinar por interés social. Así como que, ninguna persona, puede ser privada de sus bienes, salvo las excepciones de pago o indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social; pero, sobre todo, se ha precisado que, en los casos en que se limite el derecho a la propiedad, se deberá hacer con las formalidades establecidas por la ley.

127. En ese orden de ideas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha desarrollado en su jurisprudencia un concepto amplio de propiedad[81] que abarca, entre otros, el uso y goce de los bienes, definidos como cosas materiales apropiables o como objetos intangibles[82], así como todo derecho que pueda formar parte del patrimonio de una persona. Asimismo, la Corte ha protegido, a través del artículo 21 convencional, los derechos adquiridos, entendidos como derechos que se han incorporado al patrimonio de las personas[83]. Por último, resulta necesario reiterar que el derecho a la propiedad no es absoluto y, en ese sentido, puede ser objeto de restricciones y limitaciones[84], siempre y cuando éstas se realicen por la vía legal adecuada y de conformidad con los parámetros establecidos en dicho artículo 21[85] .

128. Por su parte, el Estado mexicano, tutela dicho derecho en el texto constitucional, al estatuir que, el respeto al derecho a la propiedad implica que nadie podrá ser privado, ni molestado en sus bienes sino en virtud de un juicio que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento[86]. Por ello, si existe alguna privación o restricción a este derecho por parte de particulares, el Estado se encuentra compelido a investigar y sancionar a los responsables.

129. En esa línea jurídica, el Código Penal para el Estado de Zacatecas, en su Título Décimo Octavo, establece como bien jurídico tutelado el patrimonio; y, por tanto, tipifica los delitos que atenten contra éste. Así, el artículo 317 de dicho ordenamiento jurídico, establece que: "*comete el delito de robo, el que se apodera de una cosa mueble, ajena, y sin consentimiento de quien legalmente pueda disponer de ella".*

- Del Acuerdo de terminación de queja por insuficiencia de pruebas para acreditar la violación del derecho a la propiedad y a la posesión, por parte de elementos de la Dirección de Seguridad Pública de Fresnillo, Zacatecas, por ocurridos el 03 de junio de 2019.

130. En el caso analizado, **VD** aseguró que, al momento de su detención en fecha 3 de junio de 2019, llevaba consigo la cantidad de $3,500.00 (TRES MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.); cantidad que utilizaría para realizar un pago en el establecimiento denominado Coppel. Explicó que, al momento de su revisión física, entregó dicha cantidad a los elementos captores, junto con dos teléfonos celulares; empero, al quedar en libertad, además de los referidos objetos, sólo le fue devuelta la cantidad de $1000.00 (MIL PESOS 00/100 M.N.), con la cual pagó la multa impuesta. En cuanto a este tema, cabe mencionar que, en la información remitida por la Dirección de Seguridad Pública de Fresnillo,

---

79 Ídem, art. 17.

80 Ídem, art. 21. Derecho a la Propiedad Privada. 1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social. 2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley. 3. Tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre, deben ser prohibidas por la ley.

81 Caso Sebastián Furlan y Familiares Vs. Argentina (2012): Corte Interamericana de Derechos Humanos, 31 de agosto de 2012, Serie C N° 246 (sentencia), párrafo 220.

82 Cfr. Caso Abrill Alosilla y otros Vs. Perú, Sentencia de 25 de mayo de 1926. Serie A. No. 7.

83 Cfr. Caso "Cinco Pensionistas" Vs. Perú, párr. 102, Caso Salvador Chiriboga Vs. Ecuador, párr. 55, y Caso Acevedo Buendía y otros ("Cesantes y Jubilados de la Contraloría") Vs. Perú, párr. 84.

84 Cfr. Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú, párr. 128, Caso Salvador Chiriboga Vs. Ecuador, párrs. 60 y 61, y Caso Perozo y otros vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C No. 195, párr. 399.

85 Cfr. Caso Salvador Chiriboga Vs. Ecuador, párr. 54, y Caso Acevedo Buendía y otros ("Cesantes y Jubilados de la Contraloría") Vs. Perú, párr. 84.

86 Ídem, Art. 14, Segundo párrafo.

Zacatecas, no se mencionó nada al respecto; mientras que, de los elementos que depusieron ante esta Comisión, ninguno se pronunció en torno a ello.

131. Ahora bien, esta Comisión nota, del análisis de las fotografías aportadas por el **SUBINSPECTOR LUIS ANTONIO ESTRADA HERNÁNDEZ**, en ese entonces Director de Seguridad Pública de Fresnillo, Zacatecas, que, al momento de ser presentado en barandilla, junto con **VD**, se pusieron a disposición dos teléfonos celulares, su cinturón y cierta cantidad de dinero. De la placa fotográfica se observa un billete de $500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N), así como, al menos, dos billetes de $200.00 (DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) y otros, de los que no se puede precisar con exactitud su denominación.

132. Lo anterior, hace imposible para este Organismo, pronunciarse acerca de la cantidad exacta de dinero que poseía **VD** al momento de su detención, ocurrida en fecha 03 de junio de 2019, cuando elementos de la Dirección de Seguridad Pública de Fresnillo, Zacatecas, lo detuvieron y pusieron materialmente a disposición de la autoridad administrativa, el **LIC. FIDEL LUCIO ROJAS**, otrora Juez Calificador, adscrito a la referida corporación. Ya que, para esta Comisión, resulta imposible determinar si, efectivamente al obtener su libertad, fueron dichos elementos quienes, a decir del quejoso, ya no le entregaron todo su dinero, sino solo $1000.00 (MIL PESOS 00/100 M.N.); o bien, si fue directamente el **LIC. FIDEL LUCIO ROJAS.**

133. En adición, esta Comisión considera pertinente señalar que, dentro de las pruebas que obran en autos, no existen elementos que nos permitan arribar a la conclusión de que el quejoso, al momento de su detención, traía consigo la cantidad de dinero que asegura. Toda vez que, no existe ningún otro indicio que nos permita acreditar su dicho, respecto a que llevaba consigo un total de $3,500.00 (TRES MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), y no solo los $1000.00 (MIL PESOS 00/100 M.N.) que le fueron entregados al momento en que recuperó su libertad.

134. Motivo por el cual, en el caso de los **CC. JUAN AGUILAR, EVERARDO ANTONIO DE LEÓN, RODOLFO PINALES SARABIA** y **JOSÉ ROLANDO NÚÑEZ**, elementos de la Dirección de Seguridad Pública de Fresnillo, Zacatecas, lo procedente es, como al efecto se hace, dictar Acuerdo de Terminación de Queja por insuficiencia de pruebas para acreditar la violación del derecho a la propiedad y a la posesión, en agravio de **VD**, por hechos ocurridos el día 3 de junio de 2019. Ya que, del cúmulo probatorio que integra el expediente en que se actúa, no es posible determinar la omisión por parte de dichos elementos, para entregar la cantidad de dinero que aseguró el quejoso. Asimismo, es importante mencionar que, el quejoso, tiene a salvo su derecho de presentar formal denuncia, por este aspecto, ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas.

- De la violación del derecho a la propiedad y a la posesión en perjuicio de **VD**, atribuida al **LIC. FIDEL LUCIO ROJAS**, otrora Juez Calificador adscrito a la Dirección de Seguridad Pública de Fresnillo, Zacatecas, por hechos ocurridos en fecha 3 de junio de 2019.

135. Ya se ha dicho con anterioridad, que el caudal probatorio que integra el sumario, es insuficiente para acreditar la violación del derecho a la propiedad y a la posesión en agravio de **VD**, por parte de elementos de la Dirección de Seguridad Pública de Fresnillo, Zacatecas. Sin embargo, no sucede lo mismo en el caso del **LIC. FIDEL LUCIO ROJAS**; ya que, en primer término, éste no remitió documento alguno que se relacione con los objetos que, junto con **VD**, le fueron puestos a disposición. Por lo que, en ese sentido, resulta imposible para este Organismo tener plenamente probada la cantidad de dinero que el quejoso traía consigo, así como la que finalmente se le regresó.

136. No obstante, en el caso particular, no es procedente resolver la insuficiencia de pruebas para acreditarla violación a los derechos humanos de **VD**, específicamente, su derecho a la propiedad y a la posesión; en razón de que esta Comisión cuenta con evidencias de que éste sí traía consigo cierta cantidad de dinero y que la misma fue puesta a disposición del **LIC. FIDEL LUCIO ROJAS.** Por lo que la obligación de dicho ex funcionario, era remitir el documento idóneo en el que se describieran los objetos y la cantidad de dinero que se

aseguró al quejoso, así como aquel mediante el cual se le hizo entrega de los mismos, al momento de obtener su libertad.

137. En consecuencia, ya sea que él no haya regresado su dinero a **VD** o que, en su caso, permitiera que los elementos captores se apoderaran de él, resulta igualmente responsable de la violación del derecho a la propiedad y a la posesión, en agravio del quejoso. Puesto que, como ya se dijo en líneas antecedentes, es sobre la autoridad sobre la que recae la carga de la prueba, de conformidad con los criterios establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Consecuentemente, el ex funcionario debió remitir a este Organismo, las probanzas que acreditaran, primeramente, la cantidad cierta de dinero que portaba el quejoso, y, en segundo término, que dicha cantidad le fue devuelta en su totalidad. De modo tal que, su omisión, se estima contraria a las obligaciones de protección, respeto y garantía de los derechos humanos, previstas en el artículo 1 de la Constitución General de la República, resultando responsable de la transgresión del derecho a la propiedad y a la posesión de **VD.**

138. Por último, esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, al igual que se hizo en el caso de la Recomendación recaída al expediente CDHEZ/138/2019, hace énfasis en la falta de colaboración por parte de la Dirección de Seguridad Pública de Fresnillo, Zacatecas, y el consecuente entorpecimiento de la labor investigadora de este Organismo. Lo cual, se evidencia una vez más con la información relacionada con el funcionamiento de las cámaras de vigilancia ubicadas en las instalaciones de la corporación.

139. Como en aquella ocasión, se hace notar que, contrario a la obligación que impone el artículo 159 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas[87], de almacenar las grabaciones hasta por dos años, el **SUBINSPECTOR LUIS ANTONIO ESTRADA HERNÁNDEZ**, ex Director de Seguridad Pública de Fresnillo, Zacatecas, simple y llanamente informó que: "…**PRIMERO.-** No es posible proporcionar videos por Usted solicitados debido a que no se cuenta con personal capacitado que pueda realizar la extracción de dichas grabaciones, motivo por el cual en esta corporación no existe inconveniente alguno en que personal capacitado a su digno cargo realice dicha extracción de vides de la fecha ya mencionada…" (Sic). Mientras que en el caso de la Recomendación recaída al referido expediente CDHEZ/138/2019 señaló: *"Las cámaras de video vigilancia de circuito cerrado no tienen para almacenar más de 28 días de grabación, derivado de lo anterior me es imposible facilitarle copia de videograbaciones en fecha señalada…" (Sic).*

140. Es decir, este Organismo documentó lo informado por dicho ex Director, en los diversos expedientes en donde se vieron involucrados elementos a su cargo. Observándose que, en cada uno de éstos, brindó versiones diferentes con relación a dicho tema; ya que aludió a disímiles lapsos dentro de los cuales, se pueden conservar dichas grabaciones[88]. Patrón que se repite en el caso del **LIC. CLAUDIO ALBERTO CASTRO MACÍAS**, actual Director de la Corporación. Circunstancia que es totalmente contraria a sus obligaciones de promoción, protección, defensa y garantía de los derechos humanos previstos en el parámetro de regularidad constitucional; y, por otro lado, implican un indebido entorpecimiento de la función investigadora de esta Comisión. Por lo que, al igual que en el caso del parte de novedades relacionado con este caso, se deberá investigar y deslindar responsabilidades respecto a la manipulación de la información.

141. A lo anterior, se suma el análogo entorpecimiento de la investigación ministerial propiciado por el personal del Departamento Jurídico de la Corporación Policiaca, quien, sin causa justificada, omite brindar información necesaria para el esclarecimiento de los hechos. Circunstancia que se hizo notar en las Recomendaciones recaídas a los expedientes **CDHEZ/502/2018** y **CDHEZ/138/2019**; y que una vez más se repite en el caso concreto.

---

87 Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, art. 159. Todo establecimiento, instalación o cualquier sitio en control de las autoridades federales, estatales o municipales en donde pudieran encontrarse personas en privación de la libertad, deberá contar con cámaras de video que permitan registrar los accesos y salidas del lugar. Las grabaciones deberán almacenarse de forma segura por dos años.

88 Véase prueba 23.

142. Ello, se desprende del informe de investigación ministerial que obra en autos de la carpeta de investigación […], proporcionadas por el **LIC. ÓSCAR ARMANDO DÁVILA SANTANA**, Agente del Ministerio Público, adscrito a la Unidad Especializada en Investigación Mixta, del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas. En donde se repite el patrón de exigir que cualquier información se solicite por escrito, cuando es facultad de la Policía de Investigación, realizar cuanta entrevista sea necesaria para el esclarecimiento de los hechos, máxime, si la persona imputada es un servidor público. Y, además, porque ninguna normatividad exige que la información que deba recabar la Policía de Investigación deba solicitarse por escrito a ninguna autoridad.

143. Por lo tanto, la Presidencia Municipal de Fresnillo, Zacatecas, deberá tomar las medidas necesarias e implementar las acciones idóneas, a fin de abatir dichas prácticas dentro de la Dirección de Seguridad Pública. Es decir, la práctica de informar de manera falsa y dolosa a esta Comisión, así como con la práctica de entorpecer las indagaciones tanto de este Organismo, como de la Representación Social. Pues, de lo contrario, se estarán perpetrando y tolerando conductas evidentemente violatorias de derechos humanos, en perjuicio de la ciudadanía. Lo cual, es inadmisible dentro de un Estado Constitucional de Derecho, en el cual se ha reconocido la dignidad humana, como presupuesto base de los derechos fundamentales.

VII. CONCLUSIONES DEL CASO.

1. Esta Comisión rechaza la vulneración de los derechos humanos cometida en perjuicio de cualquier persona, en el caso particular, la cometida por elementos de la Dirección de Seguridad Pública, de Fresnillo, Zacatecas, quien con sus actuaciones violentaron el derecho a la legalidad y seguridad jurídica de **VD,** quien fue objeto de detención arbitraria y de afectaciones a su derecho a la integridad física y psicológica por su parte, en fecha 03 de junio de 2019.

2. Este Organismo, estima que es imperativo que, los elementos de la Dirección de Seguridad Pública, de Fresnillo, Zacatecas, asuman el conocimiento y cumplimiento de las normas internacionales de derechos humanos. Las cuales, obligan a todos los Estados y a sus agentes, incluidos los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, imperativo que, además, debe hacerse extensivo a todas las Corporaciones del Estado.

3. En el caso específico, los **CC. JUAN AGUILAR, EVERARDO ANTONIO DE LEÓN, RODOLFO PINALES SARABIA** y **JOSÉ ROLANDO NÚÑEZ**, elementos de la Dirección de Seguridad Pública, de Fresnillo, Zacatecas, practicaron en fecha 3 de junio de 2019, una detención ilegal y arbitraria a **VD**, vulnerando con ello su derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica, en relación con el derecho a no ser objeto de detenciones arbitrarias.

4. En el caso concreto, el **LIC. FIDEL LUCIO ROJAS**, quien en fecha 03 de junio de 2019, fungía como Juez Calificador adscrito a la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Fresnillo, Zacatecas, incurrió en actos y omisiones que se manifestaron en una vulneración del derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica, en relación con el derecho a no ser objeto de detenciones arbitrarias, en agravio de **VD**.

5. Asimismo, los **CC. JUAN AGUILAR, EVERARDO ANTONIO DE LEÓN, RODOLFO PINALES SARABIA** y **JOSÉ ROLANDO NÚÑEZ**, elementos de la Dirección de Seguridad Pública de Fresnillo, Zacatecas, ejecutaron actos materialmente infractores del derecho humano a la integridad y seguridad personal. Pues se demostró que el primero y el último, agredieron físicamente a **VD,** lo que trajo como consecuencia la afectación de su integridad física; dicha vulneración, se concretó en un quebranto a su integridad física, al ejercer un uso indebido de la fuerza pública. Mientras que, en el caso de los otros 2 elementos, la vulneración se concretó, en la omisión de proteger la integridad física de **VD**, de las agresiones físicas sufridas por los otros.

6. En el caso concreto, y como consecuencia de lo anterior, el **DR. LUIS ANTONIO DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ**, médico adscrito a la Dirección de Seguridad Pública de

Fresnillo, Zacatecas, es responsable por omisión, de la violación del derecho a la integridad y seguridad personal de **VD**. Pues se tiene debidamente probado que no realizó una correcta certificación médica, lo que conllevó a que no documentara las lesiones que presentaba, y que, con posterioridad, fueron certificadas por personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas.

7. Además, no se encontraron evidencias suficientes para acreditar la violación del derecho a la propiedad y a la posesión de **VD**, que pueda atribuirse de manera directa a los **CC. JUAN AGUILAR, EVERARDO ANTONIO DE LEÓN, RODOLFO PINALES SARABIA** y **JOSÉ ROLANDO NÚÑEZ**, elementos de la Dirección de Seguridad Pública de Fresnillo, Zacatecas.

8. Sin embargo, el **LIC. FIDEL LUCIO ROJAS**, quien en fecha 3 de junio de 2019, fungía como Juez Calificador adscrito a la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Fresnillo, Zacatecas, incurrió en la vulneración del derecho a la propiedad y a la posesión, en agravio de **VD**. Pues durante la investigación, se acreditó que no documentó debidamente la cantidad de dinero que traía consigo, así como tampoco, el que se la haya devuelto en su totalidad al momento de obtener su libertad.

9. En lo que respecta a la detención de **VD,** ocurrida en fecha 4 de junio de 2019, por parte de los **CC. LUIS EDUARDO BRETADO CAMARILLO, JESÚS ESPARZA GONZÁLEZ, TOMÁS SAID GARCÍA GARCÍA** y **FERNANDO DOMÍNGUEZ CASTAÑEDA**, esta Comisión arribó a la conclusión de que la misma no vulneró el derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica del quejoso, toda vez que ésta se realizó derivado de un reporte realizado por la Policía Metropolitana, en el que solicitaron apoyo para revisar el vehículo en el que éste se transportaba, dado el exceso de velocidad con el que conducía. Asimismo, referente a los **CC. JUAN AGUILAR** y **JOSÉ ROLANDO NÚÑEZ**, se tiene debidamente acreditado que no participaron de dichos hechos.

10. Este Organismo, reitera la importancia de generar una conciencia sobre la obligación que tienen todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias y en el ejercicio de sus funciones, de respetar, garantizar y proteger los derechos humanos de todo gobernado, para que así se garantice un verdadero Estado de Derecho y que la población zacatecana, pueda tener la certeza de que su seguridad jurídica, así como su integridad y seguridad personal, se encuentran protegidas de cualquier acto de autoridad, que pudiera invadir su esfera de derechos.

VIII. REPARACIONES.

1. De conformidad con lo establecido en los artículos 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 51 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, al acreditarse violación a los derechos humanos de **VD**, atribuible a servidores públicos municipales, adscritos a la Dirección de Seguridad Pública de Fresnillo, Zacatecas, la Recomendación formulada al respecto, debe incluir las medidas que procedan para lograr la efectiva restitución de las personas afectadas en sus derechos.

2. Dicha reparación, de conformidad con los Principios y Directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones", adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 2005, las violaciones de derechos humanos deben contemplar, de forma apropiada y proporcional a la gravedad de ésta, una reparación plena y efectiva en las formas siguientes:, restitución, rehabilitación, satisfacción, indemnización, deber de investigar y garantías de no repetición. En el caso en concreto y ante la pérdida fatal, no es posible solicitar la restitución de los derechos humanos conculcados.

Las reparaciones se contemplan también en la Ley General de Víctimas, en sus artículos 1, último párrafo, 7, fracción I y II, y particularmente en el texto legal del artículo 26, que

establece que “Las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera oportuna, plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva por el daño que han sufrido como consecuencia del delito o hecho victimizante que las ha afectado o de las violaciones de derechos humanos que han sufrido, comprendiendo medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y medidas de no repetición”, además por lo previsto en el artículo 27 del mismo ordenamiento legal.

3. La Corte ha señalado que los familiares de las víctimas de violaciones de derechos humanos pueden ser, a su vez, víctimas. Ha considerado violado el derecho a la integridad psíquica y moral de los familiares de las víctimas por el sufrimiento causado por las violaciones perpetradas contra sus seres queridos y las posteriores actuaciones u omisiones de las autoridades estatales, por ello, es de vital importancia que las víctimas reciban la valoración médica y psicológica necesaria para determinar los daños que sufrieron como consecuencia de la vulneración a sus derechos, a través de la vulneración de los derechos de sus seres queridos. En este caso, como ya se ha especificado, **VD** es víctima directa de la vulneración de su derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica, en relación con su derecho a no ser sometido a detenciones arbitrarias.

En adición, **VD** es víctima directa de violaciones a su derecho a la integridad y seguridad personal, en relación con su derecho a la integridad personal. Violaciones de las cuales son responsables, los **CC. CC. JUAN AGUILAR, EVERARDO ANTONIO DE LEÓN, RODOLFO PINALES SARABIA** y **JOSÉ ROLANDO NÚÑEZ,** elementos de la Dirección de Seguridad Pública de Fresnillo, Zacatecas. Así como del **LIC. FIDEL LUCIO ROJAS**, quien fungía como Juez Calificador adscrito a la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Fresnillo, Zacatecas, y del **DR. LUIS ANTONIO DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ**, médico adscrito a la mencionada Dirección, quienes omitieron pronunciarse respecto a las alteraciones físicas que el quejoso presentaba.

A) De la indemnización.

1. La indemnización ha de concederse, de forma apropiada y proporcional a la gravedad de la violación y a las circunstancias de cada caso, por todos los perjuicios económicamente evaluables que sean consecuencia de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos o de violaciones graves del derecho internacional humanitario, tales como los siguientes:

a) El daño físico o mental;
b) La pérdida de oportunidades, en particular las de empleo, educación y prestaciones sociales;
c) Los daños materiales y la pérdida de ingresos, incluido el lucro cesante;
d) Los perjuicios morales;
e) Los gastos de asistencia jurídica o de expertos, medicamentos y servicios médicos y servicios psicológicos y sociales.[89]

2. En el presente punto, debido al contexto de los hechos, este Organismo estima que la indemnización es procedente en favor de **VD,** quien sufrió un daño físico, ocasionado por los **CC. JUAN AGUILAR, EVERARDO ANTONIO DE LEÓN, RODOLFO PINALES SARABIA** y **JOSÉ ROLANDO NÚÑEZ,** elementos de la Dirección de Seguridad Pública de Fresnillo, Zacatecas. Por lo cual, deberá ser inscrito en el Registro Estatal de Víctimas para su debida indemnización en los términos que la Ley prevé.

B) De la rehabilitación.

1. La presente reparación debe “incluir la atención médica y psicológica, así como servicios jurídicos y sociales.”[90], en ese contexto, las medidas de rehabilitación buscan reducir los padecimientos físicos y psicológicos de las víctimas, a través del otorgamiento de servicios de atención médica, psicológica, jurídica y social que éstas requieran.

2. La rehabilitación debe tomar en cuenta los gastos que ha realizado **VD**, derivado de la afectación a su salud; además de tratamientos psicológicos, necesarios para su total

89 Ídem, párr. 20.
90 Ídem, párr. 21.

recuperación, en caso de que así lo acepte y decida. Por ende, se recomienda aplicar tratamientos de rehabilitación médica y psicológica a **VD,** a cargo de la autoridad responsable, previa valoración correspondiente.

C) De las medidas de satisfacción.

1. La satisfacción cuando sea pertinente y procedente deberá incluir la totalidad o parte de las medidas siguientes:

a) Medidas eficaces para conseguir que no continúen las violaciones;
b) La verificación de los hechos y la revelación pública y completa de la verdad, en la medida en que esa revelación no provoque más daños o amenace la seguridad y los intereses de la víctima, de sus familiares, de los testigos o de personas que han intervenido para ayudar a la víctima o impedir que se produzcan nuevas violaciones;
c) La búsqueda de las personas desaparecidas, de las identidades de los niños secuestrados y de los cadáveres de las personas asesinadas, y la ayuda para recuperarlos, identificarlos y volver a inhumarlos según el deseo explícito o presunto de la víctima o las prácticas culturales de su familia y comunidad;
d) Una declaración oficial o decisión judicial que restablezca la dignidad, la reputación y los derechos de la víctima y de las personas estrechamente vinculadas a ella;
e) Una disculpa pública que incluya el reconocimiento de los hechos y la aceptación de responsabilidades;
f) **La aplicación de sanciones judiciales o administrativas a los responsables de las violaciones**;
g) Conmemoraciones y homenajes a las víctimas;
h) **La inclusión de una exposición precisa de las violaciones ocurridas en la enseñanza de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, así como en el material didáctico a todos los niveles**.[91]

2. Respecto a este concepto, de conformidad con lo establecido por los Principios sobre el derecho a obtener reparaciones, ésta debe incluir, cuando sea el caso, la totalidad o parte de las medidas siguientes: a) medidas eficaces para conseguir que no se continúe con las violaciones; b) la verificación de los hechos y la revelación pública y completa de la verdad; c) una declaración oficial o decisión oficial que restablezca la dignidad, la reputación y los derechos de la víctima; d) una disculpa pública; y e) la aplicación de sanciones judiciales o administrativas a los responsables de las violaciones[92].

3. Este Organismo considera que la autoridad a quien va dirigida la presente resolución deberá instaurar el procedimiento administrativo de investigación para determinar la responsabilidad de los **CC. JUAN AGUILAR, EVERARDO ANTONIO DE LEÓN, RODOLFO PINALES SARABIA** y **JOSÉ ROLANDO NÚÑEZ,** elementos de la Dirección de Seguridad Pública de Fresnillo, Zacatecas. Así como del **DR. LUIS ANTONIO DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ** y del **LIC. FIDEL LUCIO ROJAS**, respectivamente médico adscrito y Juez Calificador, ambos adscritos a la referida Dirección.

D) Las garantías de no repetición.

1. Este Organismo estima que la capacitación a los servidores públicos debe continuar implementándose y debe materializarse en programas y cursos permanentes de capacitación en temas de derechos humanos, particularmente del derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica y del derecho a la integridad y seguridad personal, así como en materia de uso adecuado de la fuerza, con el objetivo de garantizar la no repetición de actos infractores a derechos humanos por parte de los agentes involucrados.

2. Asimismo, esta Comisión considera trascendente fortalecer las capacidades institucionales mediante capacitación sobre los principios de protección a los derechos humanos y sobre los

---

91 Ídem, párr. 22.

92 ONU, Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas a las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves al derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, A/RES/60/147, 21 de marzo de 2006, párr.22

límites a los que deben estar sometidas, a fin de evitar que hechos como los sufridos por el agraviado se vuelvan a presentar. De ahí que, la autoridad responsable, deba acreditar la capacitación de todo el personal jurídico, administrativo y operativo, incluyendo a elementos policiacos, Jueces Calificadores y médicos adscritos a la Dirección de Seguridad Pública Municipal, de Fresnillo, Zacatecas. A fin de que realicen sus labores, bajo los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y pleno respeto a los derechos fundamentales y a la dignidad humana. Haciendo énfasis en temas relacionados al derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica, al derecho a la integridad y seguridad personal y al uso adecuado de la fuerza. Con la finalidad de mejorar las técnicas, aptitudes y métodos de trabajo policial, para la aplicación de la ley en forma correcta y eficaz, remitiendo a este Organismo, las constancias de cumplimiento respectivas

IX. RECOMENDACIONES.

Por todo lo anteriormente expuesto, y con fundamento en los 1 y 102 apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 2, 3, 4, 8, 17, 37, 51, 53, 54, 56, 57 y 58 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas se emiten las siguientes Recomendaciones:

PRIMERA. En el plazo máximo de un mes, contado a partir de la notificación de la presente Recomendación, se inscriba en el Registro Estatal de Víctimas a **VD**, en calidad de víctima directa de violaciones a sus derechos humanos. Asimismo, dentro del plazo máximo de seis meses, contados a partir de la notificación de la presente Recomendación, se garantice su acceso oportuno al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, previsto en la Ley de Atención a Víctimas del Estado de Zacatecas, a efecto de que se realice la indemnización correspondiente. Debiendo remitir a este Organismo protector de Derechos Humanos, las constancias con que acredite su cumplimiento.

SEGUNDA. Dentro del plazo máximo de un mes, contado a partir de la notificación de esta resolución se localice a **VD**, a fin de que manifieste si es su deseo recibir atención médica y psicológica, relacionada con los hechos de la presente queja. De ser el caso, en un plazo de un mes, posterior a ello, se inicie su tratamiento hasta su total restablecimiento, remitiendo a este Organismo, las constancias que acrediten su cumplimiento.

TERCERA. En un plazo máximo de un mes, contado a partir de la aceptación de la presente resolución, se inicie procedimiento administrativo de responsabilidad, en contra de los **CC. JUAN AGUILAR, EVERARDO ANTONIO DE LEÓN, RODOLFO PINALES SARABIA** y **JOSÉ ROLANDO NÚÑEZ**, elementos de la Dirección de Seguridad Pública de Fresnillo, Zacatecas. Debiendo remitir a este Organismo, las constancias de cumplimiento respectivas.

CUARTA. En un plazo máximo de un mes, contado a partir de la aceptación de la presente Recomendación, se deberá iniciar procedimiento administrativo en contra del **DR. LUIS ANTONIO DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ**, médico adscrito a la Dirección de Seguridad Pública de Fresnillo, Zacatecas. Así como en contra del **LIC. FIDEL LUCIO ROJAS,** Juez Calificador Adscrito a dicha Dirección. Debiendo remitir a este Organismo, las constancias de cumplimiento respectivas.

QUINTA. Dentro del plazo máximo de un mes, contado a partir de la aceptación de la presente resolución, se acredite la capacitación de todo el personal jurídico, administrativo y operativo, incluyendo a elementos policiacos, Jueces Calificadores y médicos adscritos a la Dirección de Seguridad Pública Municipal, de Fresnillo, Zacatecas. A fin de que realicen sus labores, bajo los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y pleno respeto a los derechos fundamentales y a la dignidad humana. Haciendo énfasis en temas relacionados al derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica, al derecho a la integridad y seguridad personal y al uso adecuado de la fuerza. Con la finalidad de mejorar las técnicas, aptitudes y métodos de trabajo policial, para la aplicación de la ley en forma correcta y eficaz, remitiendo a este Organismo, las constancias de cumplimiento respectivas.

SEXTA. Dentro del plazo máximo de un mes, contado a partir de la aceptación de la presente Recomendación, se giren indicaciones a todo el personal de la Dirección de Seguridad Pública de Fresnillo, Zacatecas, para que, en lo sucesivo, eviten entorpecer la función investigadora de este Organismo y del Ministerio Público, con motivo de hechos en donde se encuentren involucrados elementos de dicha corporación. Debiendo remitir a este Organismo, las constancias de cumplimiento respectivas.

SÉPTIMA. Dentro del plazo máximo de tres meses, contados a partir de la aceptación de la presente Recomendación, se instalen cámaras de vigilancia en todas las áreas de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, respetando desde luego, en todo momento, el derecho a la privacidad de las personas detenidas. Asimismo, se deberá garantizar que las grabaciones de dichas cámaras guarden las filmaciones por el lapso de dos años, debiendo para ello, designar personal capacitado para la correcta operación y monitoreo de dicho sistema. Así como para la extracción que, en su caso, sea necesaria con motivo de investigaciones realizadas por este Organismo o por la Representación Social. Debiendo remitir a este Organismo, las constancias de cumplimiento respectivas.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 53, párrafo segundo de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, se hace del conocimiento de la autoridad a la que va dirigida esta Recomendación, que dispone de un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente en que ésta se le notifique, para que manifieste si la acepta o no, en el entendido de que, de no aceptarla, su respuesta se hará del conocimiento de la opinión pública. En caso de que la acepte, se le notifica que dispone de un plazo de 15 días, contados a partir del vencimiento del término del que disponía para responder sobre la aceptación, a fin de enviar las pruebas de su cumplimiento.

Por último, hágasele saber a la parte quejosa que, de conformidad con el artículo 61 de la Ley de este Organismo, dispone de 30 días naturales, computados a partir de la fecha de notificación del presente documento, para que en caso de que exista inconformidad con la misma, interponga el recurso de impugnación correspondiente ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Así lo determina y firma

DRA. EN D. MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOS
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE ZACATECAS

Expediente: CDHEZ/677/2019

Tipo de queja: Oficiosa.

Persona agraviada:
C. VD†, persona detenida en separos de la Dirección de Seguridad Pública de Fresnillo, Zacatecas.

Autoridades responsables:
I. SJ1, ex Director de Seguridad Pública, del Municipio de Fresnillo, Zacatecas.
II. Elementos de la Dirección de Seguridad Pública de Fresnillo, Zacatecas.
III. AR1, ex Juez Calificador adscrito a la Dirección de Seguridad Pública de Fresnillo, Zacatecas.

Derechos humanos vulnerados:
I. Derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica, en relación con el derecho a no ser objeto de detenciones arbitrarias.
II. Derecho a la integridad personal y a la vida, en relación con el deber del Estado garante de las personas privadas de su libertad.

Zacatecas, Zacatecas, a 12 de agosto 2021, una vez concluida la investigación de los hechos que motivaron el expediente CDHEZ/677/2019, y analizado el proyecto presentado por la Visitaduría Regional de Fresnillo, la suscrita aprobó, de conformidad con los artículos 4, 8 fracción VIII, 17 fracción V, 37, 51, 52 y 56 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, en relación con lo dispuesto por los numerales 27, fracción VIII, 40, 161, fracciones X y XI, 162, 164, 165, 166, 167 y 168, del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, la **Recomendación 41/2021**, dirigida a la siguiente autoridad:

- **LIC. SAÚL MONREAL ÁVILA**, Presidente Municipal de Fresnillo, Zacatecas, por lo que hace a la detención de **VD†**, por parte de **AR1**, otrora Juez Calificador adscrito a la Dirección de Seguridad Pública de Fresnillo, Zacatecas, así como por hechos en que perdiera la vida **VD†**, mientras se encontraba bajo la custodia del Estado, en los separos de la Dirección de Seguridad Pública de Fresnillo, Zacatecas, en fecha 23 de diciembre de 2019.

Así como el **Acuerdo de No Responsabilidad**, que se dirige a la siguiente autoridad:

- **LIC. SAÚL MONREAL ÁVILA**, Presidente Municipal de Fresnillo, Zacatecas, por lo que hace a la detención de **VD†**, por elementos de la Dirección de Seguridad Pública de Fresnillo, Zacatecas, el 23 de diciembre de 2019.

R E S U L T A N D O;

I. DE LA CONFIDENCIALIDAD.

1. De conformidad con los artículos 6º, apartado A, fracción II y 16, párrafo segundo, ambos de la Constitución Política de los Estados Mexicanos y los artículos 23 y 85 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, los datos personales, así como aquellos relativos a la vida privada y familiar, permanecerán confidenciales, ya que no tienen el carácter de públicos.

2. Asimismo, en términos de lo dispuesto por el artículo 4º, párrafo sexto, 6º, fracción II, y 16 de la Convención Sobre los Derechos del Niño, los nombres, apellidos y demás datos personales de niñas y niños vinculados con los hechos de la presente resolución, se mantienen bajo la misma estricta confidencialidad, en pleno respeto a su derecho a la intimidad y vida privada.

II. RELATORÍA DE LOS HECHOS Y OBJETO DE LA CONTROVERSIA.

1. En fecha 23 de diciembre de 2019, el **SJ1**, ex Director de Seguridad Pública, del Municipio de Fresnillo, Zacatecas, informó vía telefónica a este Organismo, sobre el deceso de **VD†** quien se encontraba detenido en los separos de la corporación.

Luego, el 24 de diciembre de 2019, diversos medios de circulación estatal, publicaron notas periodísticas en las que, esencialmente, se informó sobre el deceso de **VD†**, quien se encontraba privado de su libertad en separos de la Dirección de Seguridad Pública de Fresnillo, Zacatecas.

En esa misma fecha, el Departamento de Orientación y Quejas de este Organismo, en concordancia con lo dispuesto por el artículo 30, párrafo tercero, de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, así como en el numeral 63, fracción V, del Reglamento que rige su actuar, inició de manera oficiosa, queja por el deceso de **VD†**, al interior de los separos de la Dirección de Seguridad Pública de Fresnillo, Zacatecas, acontecido el 23 de diciembre de 2019.

Por razón de turno, en esa misma fecha, se remitió el acuerdo de admisión de queja oficiosa, a la Visitaduría Regional de Fresnillo, de este Organismo, bajo el número de expediente citado al rubro, a efecto de formular el acuerdo de calificación de ésta, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 123 y 124 del Reglamento de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas.

El 24 de diciembre de 2019, la queja se calificó como presuntos hechos violatorios de derechos humanos.

2. Los hechos materia de la queja consistieron en lo siguiente:
El 23 de diciembre de 2019, el **SJ1**, ex Director de Seguridad Pública de Fresnillo, Zacatecas, informó a este Organismo sobre el presunto suicidio del señor **VD†** en el interior de los separos de la citada corporación.

Asimismo, en fecha 24 de diciembre de 2019, el diario de circulación estatal: “EL Sol de Zacatecas”, publicó nota periodística bajo el título: *“Detenido se ahorca dentro su celda”;* mientras que, el rotativo “Imagen”, informó con el título: *“Se quita la vida en su celda”.*

En dichas notas, los medios periodísticos informaron que, **VD†**, fue encontrado sin vida en el interior de los separos de la Dirección de Seguridad Pública de Fresnillo, Zacatecas, donde se encontraba privado de su libertad.

3. Las autoridades involucradas, rindieron informe respectivo:

a) En fecha 10 de enero de 2020, se recibió informe, signado de manera conjunta, por la **SJ2** y por el **SJ1**, respectivamente ex Síndica Municipal y ex Director de Seguridad Pública de Fresnillo, Zacatecas.

III. COMPETENCIA.

1. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas es competente, en términos de los artículos 1º, 4º, 6º, 8º fracción VII, inciso A) y 31 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, en relación con los numerales 15, 22 y 23 de su Reglamento Interno, debido a que la queja se promueve en contra de servidores públicos

de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Fresnillo, Zacatecas, por hechos ocurridos en el año 2019.

2. De conformidad con el artículo 124, fracción I del Reglamento Interior de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, este Organismo advierte que, de los hechos materia de la queja, se puede presumir la violación de los derechos humanos de la parte agraviada, así como la responsabilidad por parte de los servidores públicos señalados.

3. Esta Comisión, presumió la violación de los siguientes derechos:

a) Derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica, en relación con el derecho a no ser objeto de detenciones arbitrarias.
b) Derecho a la integridad personal y a la vida, en relación con el deber del Estado garante de las personas privadas de su libertad.

IV. PROCEDIMIENTO ANTE LA COMISIÓN.

Con la finalidad de documentar las presuntas violaciones a derechos humanos, así como para determinar la existencia o no de responsabilidad por parte de los servidores públicos señalados, este Organismo realizó consulta de notas periodísticas; se entrevistó a las personas relacionadas con los hechos, así como a servidores públicos que contaban con información al respecto; se recabaron comparecencias de personal de Seguridad y Custodia del Centro Regional de Reinserción Social, de Fresnillo, Zacatecas, así como de elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas; se solicitaron informes a las autoridades señaladas como responsables, así como informes en vía de colaboración; y se consultó carpeta de investigación relacionada con los hechos materia de esta Recomendación.

V. PRUEBAS.

Con base en lo estipulado en los artículos 48 y 49 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, en relación con los numerales 149, 150, 151, 152, 153, 154 y 155 del Reglamento Interior de este Organismo, durante el procedimiento realizado por esta Institución se recabaron los elementos probatorios documentales, remitidos tanto por la parte agraviada como por las autoridades señaladas como responsables, así como documentación, dictámenes e inspecciones necesarios para emitir la resolución correspondiente.

VI. SOBRE LOS DERECHOS NO VULNERADOS.

A. Derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica, en relación con el derecho a no ser objeto de detenciones arbitrarias.

1. Este Organismo, acorde a lo dispuesto por el artículo 49 de la Ley que rige su actuar, analizó el caudal probatorio contenido en el expediente **CDHEZ/677/2019**, bajo un enfoque lógico jurídico de máxima protección a la víctima; con base en los estándares internacionales, interamericanos y nacionales de derechos humanos, en los precedentes emitidos en Recomendaciones en las cuales ha estudiado la violación del derecho a la vida, así como en los criterios aplicables tanto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo anterior, en virtud de que se acreditaron violaciones a los derechos humanos de **VD†**, atribuibles a servidores públicas de la Dirección de Seguridad Pública de Fresnillo, Zacatecas.

2. Ahora bien, partiendo del hecho de que para ingresar a los separos de la citada Corporación, necesariamente precedió la detención de **VD†**, es necesario precisar que, por técnica jurídica, en la presente Recomendación, se analiza en un primer momento, el derecho a la legalidad y seguridad jurídica, en relación con el derecho a no ser objeto de detenciones arbitrarias y, en segundo término, se realiza el análisis del derecho a la integridad personal y a la vida en relación con el deber del Estado garante de las personas privadas de su libertad.

3. Luego entonces, recordemos que la persona, posee ciertos atributos y virtudes que la distinguen de los demás seres y le dan un valor en sí misma, por tanto, es posible afirmar que los seres humanos son seres dignos; esto es, entes que merecen ser respetados y a los cuales el Estado debe garantizar una serie de derechos que le permitan tener una existencia plena y compatible con su propia naturaleza. A dichos derechos, para distinguirlos de otros, se les califica como "derechos humanos"; los cuales han sido clasificados de diversas maneras, según el momento histórico en el cual se ha realizado su estudio. Destacando así, la división en derechos humanos de igualdad, derechos de libertad, y derechos de seguridad jurídica, entre otros.

4. De esta última clasificación, es fundamental señalar que el concepto de “seguridad” halla su raíz etimológica en la voz latina *securitas-atis*, cuyo significado es: “cualidad de seguro” o “certeza”, así como “cualidad del ordenamiento jurídico, que implica la certeza de sus normas y, por ende, la predictibilidad de su aplicación”[1]. Consecuentemente, esta última acepción es la idónea para definir la seguridad jurídica como el conocimiento y la certeza que tienen los gobernados de qué es lo que la ley establece como como permitido o prohibido. Y cuáles son los procedimientos que se deben llevar a cabo en cada caso, según lo establecido en el marco legal de un país.

5. De este modo, la seguridad jurídica, involucra para el gobernado la certeza de que su vida, su persona, sus papeles, su familia, sus posesiones o sus derechos deberán ser respetados por todas las autoridades; y en caso de ser necesaria su afectación, ésta se sujetará a los procedimientos y modalidades previamente establecidos en la Constitución o leyes secundarias[2]. Por lo tanto, se puede afirmar que los derechos de seguridad jurídica, son quizás los que mayor relación guardan con el estado de derecho[3]; puesto que suponen un conjunto de derechos públicos subjetivos a favor de los gobernados. Derechos que pueden oponerse principalmente a los órganos del Estado a fin de exigirles que se sujeten a un conjunto de requisitos previos a la emisión de un acto que pudiera afectar la esfera jurídica de los gobernados y así, éstos no caigan en la indefensión o en la incertidumbre jurídica[4].

6. En el Sistema Universal de Protección de Derechos humanos, específicamente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el derecho a la libertad personal se encuentra reconocido en el artículo 3°; dicha norma, establece que todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad de su persona, mientras que el numeral 9, de dicho instrumento jurídico, prohíbe la detención arbitraria. Correlativamente, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en los numerales 9.1, 9.2 y 9.3, estipula que todas las personas tienen derecho a la libertad y a la seguridad personales, quedando prohibidas cualquiera forma de detenciones o prisión arbitrarias.

7. Por otro lado, la libertad, en términos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es *“la capacidad de hacer y no hacer todo lo que esté lícitamente permitido. En otras palabras, constituye el derecho de toda persona de organizar, con arreglo a la ley, su vida individual y social conforme a sus propias opciones y convicciones”*[5]*.* Luego entonces, la libertad, definida así, *“es un derecho humano básico, propio de los atributos de la persona, que se proyecta en toda la Convención”*[6]*.* Mientras que la seguridad, es *“la ausencia de perturbaciones que restrinjan o limiten la libertad más allá de lo razonable”*; igualmente *“la seguridad también debe entenderse como la protección contra toda interferencia ilegal o arbitraria de la libertad física”*[7]*.*

---

[1] Real Academia de la lengua española, Diccionario de la Lengua Española, t II, 22ª, ed., Madrid, Espasa, Calpe, 2001, pág. 2040.
[2] Las Garantías de Seguridad Jurídica, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2015, pág. 11.
[3] CARBONELL, Miguel, Los Derechos Fundamentales en México, CNDH, 2004, pág. 585.
[4] Ídem, pág. 13.
[5] Corte IDH, *Caso Valle Jaramillo y otros.* Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 192, párr. 108.
[6] Ídem.
[7] Corte IDH, *Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez vs. Ecuador*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de noviembre de 2007. Serie C No. 170, párr. *53.*

8. En línea con el criterio anterior, en el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, el artículo 7.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, protege de manera general el derecho a la libertad y seguridad personales; en tanto que, los demás numerales tutelan las diversas garantías que deben cumplirse a la hora de privar a una persona de su libertad, cuando dicha detención sea atribuible a un agente del Estado. Entonces pues, **la detención de una persona es legítima, si está contemplada en la legislación interna de un Estado Parte de la Convención**, pero, **al mismo tiempo, se ajusta a lo dispuesto por la propia Convención**[8]. Adicionalmente, **deben considerarse** circunstancias tales como **si la detención ha sido ordenada por una autoridad judicial**, o **si se está en situaciones de flagrancia**[9]. Ello, conforme a lo contemplado por el artículo 7.2, que de manera literal establece lo siguiente:

> *"Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados parte o por las leyes dictadas conforme a ellas".*

9. Bajo ese entendido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha establecido un criterio por medio del cual se ha pronunciado en el sentido de que, para analizar la privación de la libertad de una persona, deben tomarse en cuenta dos aspectos importantes, puesto que, en supuestos de detención calificados de legales, se debe respetar tanto el principio de tipicidad, como los procedimientos previamente establecidos. Lo anterior significa que nadie puede verse privado de la libertad personal sino por causas, casos o circunstancias expresamente tipificadas en la ley **(aspecto material**), pero, además, con estricta sujeción a los procedimientos objetivamente definidos por la misma **(aspecto formal)[10].**

10. Luego entonces, la detención o privación de la libertad de una persona será calificada como **ilegal, cuando no se realice con estricta sujeción a la normatividad interna, tanto en lo referente a los motivos y condiciones, como a los procedimientos establecidos**. Mientras que, la detención o privación de la libertad considerada como **arbitraria,** será aquélla que, **aún y cuando sea calificada de legal conforme a la normatividad estatal, se realice sin observar las disposiciones internacionales en materia de derechos humanos**. Es decir, aquélla que carezca de razonabilidad, proporcionalidad, garantías del debido proceso y garantías judiciales.

11. En el marco jurídico interno, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el artículo 14, párrafo segundo, que: *"Nadie podrá ser privado de la libertad (…) sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho"*[11]. Adicionalmente, el artículo 16 párrafo primero, constitucional establece que: "*Nadie puede ser molestado en su persona (…) sino en virtud de mandato escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento*"; pero además, en su párrafo quinto, el mismo precepto constitucional indica que: "*Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más cercana y ésta con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. Existirá un registro inmediato de la detención".*[12].

12. Como puede advertirse, el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, faculta la detención de cualquier persona, siempre y cuando se actualice cualquiera de los siguientes tres formalismos: mediante orden de aprehensión girada por el Juez competente, por orden de detención en caso urgente, girada por el Ministerio Público, o bien, en caso de delito flagrante; y, desde luego, el propio numeral impone a quien lleve a cabo tal detención, la obligación de poner inmediatamente a disposición de la autoridad competente a la persona detenida, y ésta, con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. Ello, en caso de que la conducta desplegada por el gobernado pueda constituir un hecho que

---

[8] Corte IDH, *Gutiérrez Soler Vs. Colombia*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 12 de septiembre de 2005. Serie C No 132. párr. 52.
[9] Ídem.
[10] Corte IDH, *Caso Acosta Calderón*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de junio de 2005. Serie C No. 129, párr. 57.
[11] Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, art. 14.
[12] Ídem, art. 16.

la ley señala como delito, so pena de incurrir en arbitrariedad en la detención, si no se siguen tales formalidades.

13. En concordancia con lo anterior, el artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales acota los supuestos de flagrancia, bajo los cuales una persona puede ser detenida, siento éstos, cuando es sorprendida en el momento de estar cometiendo un delito, cuando inmediatamente después de cometerlo es detenida, en virtud de ser sorprendida cometiendo el delito y es perseguida material e ininterrumpidamente; o bien, cuando la persona sea señalada por la víctima u ofendido, algún testigo presencial de los hechos o quien hubiere intervenido con ella en la comisión del delito y cuando tenga en su poder instrumentos, objetos, productos del delito o se cuente con información o indicios que hagan presumir fundadamente que intervino en el mismo.

14. Respecto de la flagrancia, es conveniente destacar que, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 1596/2014, precisó que, lo flagrante es "*aquello que brilla a todas luces"*; lo cual significa que es evidente e inconfundible, por lo que la concurrencia de una conducta delictiva flagrante es una condición que forzosamente debe configurarse con anterioridad a la detención. Eso conlleva a resolver entonces que, la autoridad, no tiene facultades para detener a una persona ante la sola sospecha de que pudiera estar cometiendo un delito (o de que estuviera por cometerlo); o simplemente porque presuma que esté involucrado en la comisión de un delito, incluso aunque eso sea objeto de investigación, si no cuenta con una orden de detención del órgano ministerial; así como tampoco se puede detener con la intención de investigar.

15. Ahora bien, además de la regulación del derecho a la libertad personal en materia penal, hasta aquí analizada, conviene precisar que, a la par, existe normatividad en materia de infracciones comunitarias y faltas a los bandos gubernativos; normatividad que propicia la intervención de autoridades administrativas y de Seguridad Pública, las cuales se encuentran facultadas para la aplicación de dicha normatividad, a efecto de mantener el orden y la paz pública. De este modo, la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, faculta a las autoridades administrativas para aplicar sanciones a las personas que infrinjan los reglamentos gubernativos y de policía, limitando dichas sanciones aplicables, al cobro de multa, imposición de arresto hasta por 36 horas o trabajo en favor de la comunidad. Aunado a ello, el Constituyente precisó que, si el infractor no pagare la multa impuesta, ésta deberá conmutarse por un arresto que, en ningún caso, excederá de 36 horas[13]. Criterio que comparte nuestra Constitución Local, al facultar a la autoridad administrativa a aplicar las mismas sanciones, en un plazo no mayor a tres horas, a partir de que tengan conocimiento del asunto.[14]

16. Bajo dicha línea normativa, en fecha 05 de julio de 2002, se publicó el decreto mediante el cual se promulgó la Ley de Justicia Comunitaria para el Estado de Zacatecas, cuyo objetivo, entre otros, es crear un sistema de justicia comunitaria y establecer las sanciones administrativas que pueden imponerse conforme a la propia ley, por actos u omisiones que alteren el orden público. Dicha Ley, delimita que, como infracción comunitaria, debe entenderse el **acto u omisión que viole el bando de policía y buen gobierno o altere el orden público**, y como presunto infractor, a la persona a la cual se le imputa la comisión de una infracción comunitaria; además, señala que, entre las autoridades que cuentan con facultades para su aplicación, se encuentra la Dirección de Seguridad Pública Municipal.[15]

17. Aunado a lo anterior, cabe precisar que, la Ley de Justicia Comunitaria del Estado de Zacatecas, prevé la figura del Juez Comunitario, al cual, faculta entre otras cosas, para instaurar el procedimiento administrativo y aplicar las sanciones previstas en el punto anterior, por infracciones al Bando de Policía y Buen Gobierno, o a las disposiciones de la propia ley[16]. Mientras que, en su artículo 20, prevé como infracción administrativa, entre otras: injuriar u ofender a cualquier persona con palabras o movimientos corporales;

---

[13] Ídem, art. 21, párr. sexto.
[14] Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, art. 32, párr. sexto y séptimo.
[15] Ley de Justicia Comunitaria para el Estado de Zacatecas, art. 1, 2, fracciones VI y VII y 5, fracción V.
[16] Ídem, art. 8.

escandalizar o producir ruidos por cualquier medio que notoriamente atenten contra la tranquilidad o la salud de las personas.

18. Siguiendo dicha línea normativa, en el ámbito municipal, el Código Municipal Reglamentario de Fresnillo, Zacatecas, establece que, uno de los servicios públicos del Ayuntamiento es la Seguridad Pública incluyendo dentro de ésta a la Policía Preventiva[17]. Asimismo, el propio ordenamiento legal indica que, la seguridad pública y protección ciudadana corresponde en forma primaria al propio Ayuntamiento, teniendo como fines los siguientes:

> I. Mantener el orden público dentro de la jurisdicción del Municipio y proteger los intereses de la sociedad.
> II. Vigilar y brindar protección a la ciudadanía.
> III. Prevenir en la medida de lo posible, la comisión de delitos, así como las faltas al propio Código Municipal Reglamentario y demás disposiciones legales de la materia, utilizando los medios adecuados que garanticen la integridad física de las personas infractoras y sus pertenencias.[18]

19. En ese sentido, el citado Código Municipal estipula que, constituyen una falta administrativa, las acciones u omisiones individuales o de grupo, realizada en un lugar público o cuyo efecto se manifieste en él, y se altere o ponga en peligro el orden público o **la integridad de las personas en su seguridad, tranquilidad** o propiedades. Entendiéndose como lugares públicos, de conformidad con dicho ordenamiento: **todo espacio de uso común y de libre tránsito**, incluyendo las plazas, los mercados y los jardines; los inmuebles de uso general, tales como centros de espectáculos, diversión y recreo, así como los transportes del servicio urbano o similares públicos.[19]

20. Por otro lado, el Código indica que, los miembros del cuerpo de Seguridad Pública tienen entre otras, las obligaciones de actuar dentro del marco jurídico, respetando en todo momento la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, las Leyes que de ellas emanen, así como las contenidas en el propio Código; asimismo, dispone que deben conducirse con respeto a la comunidad, respetar y observar la protección de los derechos humanos; desempeñar con honradez, responsabilidad y prontitud el servicio encomendado, absteniéndose de cometer actos de corrupción, abuso de autoridad o hacer uso de sus atribuciones para lucrar para sí o para interpósita persona; y en su caso, solicitar los servicios médicos de urgencia cuando dichas personas se encuentren lesionadas o en estado de gravedad, así como avisar a sus familiares o conocidos en tal circunstancia.[20]

21. Por otra parte, el citado ordenamiento, prevé la función conciliadora y calificadora, atribuyéndosela a la figura del Alcaide; funcionario que será designado por el Ayuntamiento, a propuesta del Presidente Municipal. Éste, contará, entre otras, con las siguientes atribuciones: **conocer, calificar e imponer las sanciones administrativas municipales** que procedan por faltas o infracciones al Código y demás disposiciones de carácter general, contenidas en los ordenamientos expedidos por el Ayuntamiento; así como llevar un **libro de registro** donde se inscriban las personas infractoras y **que contenga los datos mínimos de sus generales, la hora y fecha, así como el motivo y el monto de la infracción**.[21] Dichos funcionarios tienen prohibido girar órdenes de aprehensión, imponer sanciones que no estén señaladas en el citado Código Municipal Reglamentario o demás disposiciones legales, conocer asuntos de carácter civil, fiscal, laboral, administrativo e imponer sanciones de carácter penal; ordenar la detención que sea competencia de otras autoridades; y **dañar la integridad de la persona**[22].

22. Además del precitado Código, a partir del 28 de marzo de 2018, entró en vigor el Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Fresnillo, en cuya exposición de motivos, se cita al Maestro Nava Negrete, quien, en lo concerniente sostiene que dicho instrumento jurídico, puede entenderse como sigue:

---

[17] Código Municipal Reglamentario de Fresnillo, Zacatecas, art. 535, fracción VIII.
[18] Ídem, art. 545.
[19] Ídem, art. 552 y 553.
[20] Ídem, art. 547.
[21] Ídem, art. 548.
[22] Ídem, art. 549.

> *"El ordenamiento de carácter general que expiden las autoridades administrativas para preservar el orden, la seguridad y la tranquilidad públicos. Regula las actividades de la administración y de los particulares, para asegurar esos objetivos, previendo las sanciones administrativas que corresponda aplicar a los infractores del mismo."*[23]

23. En la propia exposición de motivos, en un claro intento por garantizar la protección más amplia a las personas, se estableció de forma precisa que, el Capítulo Primero de dicho ordenamiento jurídico, determina que el Bando es **el primero de los instrumentos normativos que habrá de aplicarse en la geografía municipal, en sustitución de un anacrónico Código Municipal Reglamentario**; además, **se establece** la regulación de la organización política y administrativa del municipio, así como **la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos**, y se incluyen las obligaciones de las personas que se encuentren en este territorio, **además de las competencias, funciones, facultades y atribuciones de los servidores públicos municipales** de conformidad con la Constitución Federal, los Tratados Internacionales, la Constitución Política del Estado, la Ley Orgánica, y demás leyes aplicables[24].

24. Con base en las disposiciones del mencionado Bando, se entiende por servicio público: "*toda actividad técnica destinada a satisfacer las necesidades básicas de la población en distintos rubros, a través de la prestación de un servicio de la administración municipal centralizada y descentralizada, de particulares o de ambos, en condiciones de generalidad, uniformidad y regularidad; con la mayor cobertura y calidad posibles, buscando siempre el bienestar de habitantes del Municipio de Fresnillo".* [25] Además, faculta al Ayuntamiento, a través de sus dependencias, para organizar, administrar y reglamentar la creación, organización, administración, funcionamiento, conservación y explotación de las funciones y servicios públicos[26], entre los que se encuentra la Seguridad Pública Policía Preventiva y Tránsito, en los términos de la Constitución Federal. [27]

25. En lo que concierne a la Seguridad Pública se establece que las autoridades municipales contarán con las atribuciones que, al respecto, prevén la Constitución Federal, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Constitución Política del Estado, la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Zacatecas, la Ley Orgánica, el propio Bando Municipal, y las demás disposiciones vinculadas en la materia. Mientras que, en lo que respecta a Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, se regirán por la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y de la Delincuencia, leyes estatales de la materia, y lo establecido en el propio Bando.[28].

26. Por otro lado, en su artículo 132, el Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Fresnillo, alude también al supuesto de flagrancia y establece de forma clara que, toda persona que sea detenida por la comisión de delitos flagrantes, será consignada inmediatamente a la autoridad competente, sin demora, sin que ello lo exima de que se le apliquen las sanciones que le correspondan, por las infracciones cometidas al propio Bando y las demás disposiciones municipales de observancia general. Finalmente, en el precepto 133, estatuye que se entenderá que el presunto infractor es sorprendido en flagrancia cuando se presencie la comisión de la infracción, o cuando inmediatamente después de ejecutada ésta, se le persiga materialmente y detenga.

27. En lo atinente a las infracciones, el Bando contempla como tal, **todo acto u omisión que altere o ponga en peligro el orden público** y que contravenga las disposiciones contenidas en el propio Bando, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas que emita el Ayuntamiento, independientemente de la responsabilidad civil o penal, que motive la conducta de los infractores en el mismo hecho[29].

---

[23] Exposición de motivos, para la promulgación del Bando de Policía y Gobierno, del Municipio de Fresnillo, pág. 1.
[24] Ídem, pág. 3.
[25] Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Fresnillo, art. 62.
[26] Ídem, art. 63.
[27] Ídem, art. 64, fracción XIII.
[28] Ídem, art. 107.
[29] Ídem, art. 130.

28. De esta manera, en su artículo 134, establece las conductas que son consideradas como infracciones que constituyen faltas contra la tranquilidad y el orden público, a saber:

I. Portar o utilizar rifles o pistolas de municiones, postas de plomo, diábolos, dardos peligrosos o cualquier otra arma que vaya en contra de la seguridad del individuo, o que puedan causar daño en propiedades públicas o privadas, en sitios no permitidos o acondicionados para tal efecto;

II. Fabricar, acopiar o vender cohetes u otros fuegos artificiales sin el permiso de la Autoridad Municipal y demás autoridades competentes;

III. Detonar cohetes u otros fuegos artificiales causando molestia a la ciudadanía;

IV. Alterar el orden, arrojar líquidos u objetos, prender fuego, o provocar alarma infundada en cualquier reunión, evento o espectáculo público, que pueda generar pánico o molestias a los asistentes;

V. **Provocar o incitar riñas causando molestias a las personas en lugares públicos o privados**, ya sea individualmente o valiéndose de grupos o pandillas;

VI. Subir a las bardas o cercos para espiar a los interiores de los domicilios o faltar al respeto a sus moradores;

VII. **Introducirse en** residencias, **locales**, o lugares de acceso restringido sin la autorización correspondiente;

VIII. Efectuar actividades en la vía pública que causen peligro al vecindario, se interrumpa el tránsito peatonal o vehicular y que pongan en peligro su vida o la de terceros;

IX. Transitar en cualquier medio de transporte por las vías públicas, aceras o ambulatorias de las plazas o parques públicos incurriendo en molestias a la población;

X. Arrojar de manera intencional sobre las personas objetos o substancias que causen molestias o daños en su físico o indumentaria;

XI. Alterar, inutilizar, quitar o destruir la señalética colocada para regular los servicios públicos o indicar peligro;

XII. No utilizar las medidas de seguridad necesarias, siendo el propietario o poseedor de un animal peligroso al encontrarse en la vía pública o lugares de uso común;

XIII. Azuzar a un animal para dañar a personas o sus bienes;

XIV. Mantener en propiedad privada o pública animales que pongan en peligro la integridad de las personas y sus bienes;

XV. Molestar al vecindario con aparatos musicales o cualquier otro medio usado con alta intensidad, de conformidad con lo establecido en la Ley de Ingresos del Municipio;

XVI. Pernoctar en las vialidades, parques, plazas, áreas verdes y demás sitios públicos, salvo en hospitales y centrales de autobuses por imperiosa necesidad;

XVII. Realizar cualquier actividad en la vía pública con el propósito de solicitar dádivas de cualquier especie, y que dicha actividad cause molestias;

XVIII. Interrumpir el paso de desfiles autorizados o de cortejos fúnebres, por sí o a través de vehículos, animales u otro medio;

XIX. Dificultar u obstaculizar el libre tránsito sobre las vialidades o banquetas mediante excavaciones, topes, escombro, materiales, muebles u objetos, sin el permiso de la Autoridad Municipal;

XX. Impedir u obstaculizar la realización de una obra de servicio social o beneficio colectivo sin causa justificada, o utilizarla antes que la autoridad correspondiente la ponga en operación;

XXI. Abusar o aprovecharse de la ingenuidad, buena fe o ignorancia de las personas, lucrando mediante predicciones o adivinaciones, valiéndose para ello de cualquier medio;

XXII. Asear, reparar, lubricar, revisar o vender vehículos automotores y sin motor o cualquier tipo de mercancía en la vía pública, alterando la libre

circulación de vehículos o personas en las banquetas o arrollo vehicular, causando molestias, contaminación y mala imagen urbana;
XXIII. Permitir, los padres de familia o las personas que ejerzan la patria potestad o la tutela sobre los menores de edad, que éstos, incurran en acciones que causen molestias a las personas o a sus propiedades;
XXIV. Custodiar vehículos en la vía pública, a cambio de cualquier dádiva, no autorizada por el conductor;
XXV. Apartar lugares de estacionamiento en la vía pública;
XXVI. Utilizar lotes baldíos o construcciones en desuso para fomentar un ambiente de inseguridad, causar molestias o daños;
XXVII. Propiciar por descuido o abandono de bienes inmuebles, molestias, daños o fomentar un ambiente de insalubridad o inseguridad;
XXVIII. Causar daños o escándalo en el interior de los panteones, internarse en ellos en plan de diversión o hacer uso indebido de sus instalaciones;
XXIX. Introducir o ingerir bebidas alcohólicas, o consumir cualquier otra sustancia tóxica, en centros escolares, cines, oficinas y recintos públicos;
XXX. Transportar, manejar, almacenar o utilizar en lugares públicos o privados, combustibles y substancias peligrosas, sin el cumplimento de las normas correspondientes o las precauciones y atenciones debidas;
XXXI. Deambular en la vía pública en estado de ebriedad o bajo el influjo de sustancias tóxicas alterando el orden, e
XXXII. Ingerir bebidas alcohólicas o sustancias tóxicas en vía pública, inmuebles desocupados o interiores de vehículos.

29. Mientras que, en el numeral 136, indica que constituyen faltas contra la autoridad, las siguientes:

I. Obstaculizar o entorpecer el desempeño en el ejercicio de sus funciones del Presidente, Síndico, regidores o de cualquier servidor público;
II. **Agredir física, verbalmente o con señas obscenas** al Presidente, Síndico, regidores o **cualquier servidor público, en el desempeño de sus labores o con motivo de las mismas;**
III. Proferir palabras ofensivas o ejecutar actos irrespetuosos dentro de los edificios públicos;
IV. Obstaculizar el funcionamiento de las líneas telefónicas destinadas a los servicios de emergencia o asistencial, o solicitar falsamente el auxilio de las mismas;
V. Usar sirenas, uniformes, insignias, códigos o cualquier otro implemento de uso exclusivo de los cuerpos de seguridad pública y protección civil municipales, sin tener la facultad para ello;
VI. Destruir, o maltratar intencionalmente, documentos oficiales, libros, leyes, reglamentos, circulares o cualquier otro objeto similar en oficinas e instituciones públicas;
VII. No exhibir públicamente o negarse a presentar a la autoridad municipal que le requiera, la autorización, licencia o permiso expedida por el Municipio, y
VIII. Impedir el acceso de la autoridad municipal cuando con motivo de sus funciones tenga que ingresar a fraccionamientos, colonias, edificios en condominio o cualquier inmueble privado.

30. De la misma forma, en coincidencia con la Constitución General de la República, la Local de esta Entidad Federativa, la Ley de Justicia Comunitaria y el Código Municipal Reglamentario de Fresnillo, Zacatecas, el citado Bando de Policía y Gobierno, del Municipio de Fresnillo, enumera como sanciones a aplicar: la multa, el arresto hasta por treinta y seis horas y prestar servicio o labor en favor de la comunidad; además de la amonestación pública o privada, entre otras. Entendiéndose dichas sanciones, como sigue:

I. Amonestación: la reconvención pública o privada mediante el cual se llame la atención por escrito, que, por única vez, hará la autoridad municipal al infractor donde le dará a conocer la falta cometida y lo

> exhortará a no reincidir, apercibiéndolo de que se hará acreedor a sanciones mayores en caso de una nueva infracción.
> II. Multa: Consiste en el pago en efectivo que deberá hacer el infractor a la Dirección de Finanzas y Tesorería, tomando como base la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de cometer la infracción.
> III. Arresto: Medida de privación de la libertad, para tomar a una persona bajo custodia en el área de separos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal;
> IV. Trabajo en favor de la comunidad: Trabajo físico realizado por un ciudadano que tiene como objeto mejorar el entorno municipal como sanción a una infracción cometida[30].

31. Adicionalmente, conviene precisar que, en su artículo 170, el citado Bando estatuye que, entre las **autoridades responsables de su aplicación**, en lo que concierne a conocer y autorizar medidas de control, se encuentran el **Juez Comunitario** y el **Oficial Calificador**. En tanto que, **para conocer y sancionar**, faculta al **Juez Comunitario**, preferentemente sobre las infracciones comunes cometidas en contra de los bienes jurídicos tutelados en el Bando y las infracciones dispuestas en los reglamentos municipales; y **al Oficial Calificador**, preferentemente sobre las **infracciones descritas en el Bando** y que **por su naturaleza deba tener conocimiento la Dirección de Seguridad Pública por conducto de sus elementos de policía**.

32. Finalmente, es necesario establecer que, en el numeral 174 del Bando en comento, se indica que, corresponde al Oficial Calificador, lo siguiente:

> I. Dictar las medidas de seguridad que considere pertinentes y en su caso, ratificarlas o dejarlas sin efecto.
> II. Conocer y calificar las infracciones, así como determinar las sanciones;
> III. Poner en conocimiento de la autoridad correspondiente, cualquier delito del orden común o federal, incurriendo en responsabilidad en caso de omisión, y
> IV. Tener bajo su responsabilidad el registro de infractores.

33. En lo que este último tema concierne, este Organismo Estatal Autónomo, a través de las diversas investigaciones en que se ha visto involucrada la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Fresnillo, Zacatecas, incluyendo la que nos ocupa, ha documentado que los denominados **Jueces Calificadores**, adscritos a la Dirección de Seguridad Pública Municipal, son en quienes se ha encomendado dicha función. Bajo esa premisa, en primer término, se analizará la actuación desplegada por los elementos de la corporación que efectuaron la detención de **VD†**, para posteriormente, estudiar la intervención del Juez Calificador que tomó conocimiento de los hechos, una vez que éste fue puesto a su disposición, a efecto de establecer si la detención del quejoso se advierte ilegal y/o arbitraria.

- De la actuación de **PP1** y **PP2** en la detención del **C. VD†**.

34. Primeramente, es necesario puntualizar que la seguridad pública, es una función que se ejerce a través de los distintos niveles de gobierno (Federación, Distrito Federal, Estados y Municipios) conforme a las leyes que expida el Congreso de la Unión para tal efecto. Entre las cuales, puede citarse la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que contiene previsiones acerca del modo en que las distintas dependencias de la administración pública tratarán de garantizar y brindar seguridad pública.

35. Razón por la cual, en un marco integral de coordinación entre las corporaciones de seguridad pública de nuestro país, a partir del 03 de octubre de 2016, se inició la primera fase de implementación del Sistema de Emergencias 911[31], encontrándose Zacatecas entre las primeras Entidades Federativas que así lo hicieron. Circunstancia que este Organismo destaca, en razón a que la intervención de elementos de la Dirección de Seguridad Pública,

---

[30] Ídem, art. 140 y 141.
[31] Obtenido de: https://www.gob.mx/911

de Fresnillo, Zacatecas, que participaron en los hechos que ahora se resuelven, se desprendió precisamente de un reporte ciudadano realizado a dicho sistema, lo que facultaba y obligaba a dichos elementos a atender la situación para brindar apoyo a la persona reportante, en el marco de su competencia.

36. En cuanto a este tema, se cuenta con el informe que, en vía de colaboración, rindió **AC1**, Coordinador del Subcentro C4 de Fresnillo, Zacatecas, quien remitió el incidente […], del que se desprende que, en fecha 23 de diciembre de 2019, se recibió llamada telefónica del número […], donde la persona reportante señaló que una persona del sexo masculino había ingresado al taburete de "Burritos Alondra", por lo que la dueña del establecimiento habría realizado señas al propio reportante para que llamara al Sistema de Emergencias. El contenido de dicho reporte, coincide con los resultados de la investigación de campo realizada por personal de esta Comisión, de la que se obtuvo el testimonio de la persona que, en fecha 23 de diciembre de 2019, atendía la negociación en comento, quien confirmó que el ahora occiso sí ingresó hasta el lugar donde ella estaba atendiendo y fue ese el motivo por el que uno de los clientes realizó dicho reporte. Asimismo, concuerda con el contenido del informe de autoridad que, con motivo de la queja, rindieron de manera conjunta **SJ2** y **SJ1**, ex Síndica Municipal y ex Director de Seguridad Pública de Fresnillo, Zacatecas.

37. Entonces pues, se advierte que la presencia de los elementos policiacos en el lugar de la detención de **VD†**, se encontraba justificada, en la medida en que dicha persona, al menos por lo que se deduce del reporte, habría ingresado sin autorización, al negocio denominado "Burritos Alondra". Ahora bien, de la información que proporcionó la propia empleada del establecimiento, se deduce que el ahora occiso sí incurrió en la comisión de una falta administrativa, ya que, según explicó además de ingresar sin autorización hasta donde ella despachaba, profirió insultos no solo en contra de los comensales, sino también de los elementos policiacos que practicaron su detención, a quienes incluso, según detalló, intentó agredir físicamente. Al respecto, debe hacerse énfasis en que su versión robustece la que proporcionaron a este Organismo los agentes **PP1** y **PP2**, elementos policiacos que intervinieron en la detención del ahora occiso, quienes manifestaron que, al llegar al lugar, éste comenzó a agredirlos y por tal motivo procedieron a su aseguramiento y posterior traslado a la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

38. Dicha conducta desplegada por el señor **VD†**, de acuerdo con la legislación estatal y municipal precitadas, es constitutiva de faltas sancionable por las autoridades administrativas; ya que, además de su ilegal ingreso al establecimiento comercial en comento, con los insultos que profirió en contra de los comensales y luego en contra de la autoridad, evidentemente alteró el orden público y por ende, violó disposiciones del Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Fresnillo, Zacatecas, según lo dispone la Ley de Justicia Comunitaria para el Estado de Zacatecas, en sus artículos 1, 2, fracciones VI y VII y 5, fracción V, en coincidencia con lo que al efecto estatuye el propio Bando en su artículo 130.

39. Por tanto, atentos a dichos ordenamientos jurídicos y a las disposiciones del Código Municipal Reglamentario del mismo Municipio, el hecho de que el señor **VD†**, se introdujera a la negociación denominada "Burritos Alondra", sin contar con el permiso de los dueños o de la persona que en ese momento atendía, además de insultar a los comensales, aunado al reporte ciudadano realizado al Sistema de Emergencias 911, justificó la presencia policíaca en el lugar. Pero, además, justificó su detención, en atención a que, al arribar, los agentes **PP1** y **PP2**, presenciaron la comisión infraganti de dicha conducta, al apreciar de primera mano que el ahora occiso estaba dentro del local comercial, además de que insultaba a los comensales y, posteriormente, también a ellos. Las primeras conductas, encuadran dentro del supuesto normativo contenido en la fracción I de la Ley de Justicia Comunitaria del Estado de Zacatecas, a saber: **injuriar u ofender a cualquier persona con palabras o movimientos corporales**; así como, en las previstas en el numeral 134, fracciones V y VII del Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Fresnillo, consistentes en: p**rovocar o incitar riñas causando molestias a las personas en lugares públicos o privados**, ya sea individualmente o valiéndose de grupos o pandillas; e **introducirse en** residencias, **locales**, o lugares de acceso restringido sin la autorización correspondiente.

40. Mientras que, el hecho de haberlos agredido, encuadra dentro del supuesto establecido en el numeral 136, fracción II del multicitado Bando de Policía y Buen Gobierno Municipal, que contempla como faltas contra la autoridad, entre otras, **agredir física, verbalmente o con señas obscenas** al Presidente, Síndico, regidores o **cualquier servidor público, en el desempeño de sus labores o con motivo de las mismas.** Consecuentemente, la obligación de los elementos **PP1** y **PP2**, en uso de sus facultades, era actuar en consecuencia, y demás de detenerlo por las conductas en que incurría, prevenir que, con su conducta hostil, el señor **VD†** pudiera agredir físicamente a los comensales, o provocar que alguno respondiera a los insultos y lo agrediera a él.

41. Bajo ese contexto, este Organismo resuelve que, la detención del señor **VD†** a manos de los elementos de Policía Preventiva de Fresnillo, Zacatecas **PP1** y **PP2** se encuentra debidamente sustentada en los preceptos normativos que se han invocado, al ajustarse a las causas, casos o circunstancias expresamente tipificadas en la ley **(aspecto material**), pero, además, con estricta sujeción a los procedimientos objetivamente definidos por la misma **(aspecto formal)**, por lo que no se advierte viciada de ilegalidad o arbitrariedad. Y, en consecuencia, lo procedente es dictar en su favor, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 51 y 52 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas el correspondiente **Acuerdo de No Responsabilidad.**

- De la actuación de **AR1**, otrora Juez Calificador adscrito a la Dirección de Seguridad Pública de Fresnillo, Zacatecas.

42. De las constancias que integran el expediente que nos ocupa, este Organismo tiene debidamente probado que, **AR1**, otrora Juez Calificador adscrito a la Dirección de Seguridad Pública de Fresnillo, Zacatecas, causó baja de la Administración Municipal, por lo que, en ese sentido, se actualiza la hipótesis contenida en el artículo 161, fracción XII de su Reglamento Interno, que impone la conclusión del expediente, al menos en lo que respecta a su actuar, por no existir materia para seguir conociendo del expediente. No obstante, por la naturaleza del asunto, que involucra la pérdida de una vida humana, esta Comisión determina analizar de manera puntual las omisiones en que este incurrió, en un afán por visualizar que, con ello, se impactó de manera grave en la violación de no solo del derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica del señor **VD†**, por la detención arbitraria a la que lo sometió, sino también, en el quebranto de su derecho a la integridad personal y a la vida.

43. Veamos, de acuerdo con el contenido del informe de autoridad suscrito por la **SJ2** y por el **SJ1**, ex Síndica Municipal y ex Director de Seguridad Pública de Fresnillo, Zacatecas, **VD†** fue detenido en fecha 23 de diciembre de 2019, alrededor de las **09:15** horas, por **PP1** y **PP2**, elementos de la Dirección de Seguridad Pública de dicho Municipio, luego de que se recibiera el ya detallado reporte al Sistema de Emergencias 911. Posteriormente, sostuvieron los ex funcionarios municipales en dicho informe, fue trasladado de manera inmediata a la Dirección de Seguridad Pública Municipal y se dejó a disposición de **AR1**, otrora Juez Calificador adscrito a la Dirección de Seguridad Pública de Fresnillo, Zacatecas. Información que es posible corroborar al concatenarse con el contenido del incidente número **19140869**, proporcionado a esta Comisión por **AC1**, Coordinador del Subcentro C4, de Fresnillo, Zacatecas; pues de dicho documento, se desprende que el horario en que el radio operador recibió dicho reporte, fue el de las **09:02:59 horas**, mientras que el horario en el cual se aseguró a la persona reportada, fue el de las **09:16:54.**

44. Luego, del libro de registro de detenidos que se adjuntó al referido informe de autoridad, se desprende que, el horario en que ingresó **VD†** a las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública de Fresnillo, Zacatecas, fue el de las **09:30 horas**; mientras que, de la inspección de los videos de las cámaras de vigilancia de la citada corporación, el personal de esta Comisión, advirtió que, el horario de ingreso de dicha persona, sucedió a las **08:33:50** (recordemos que, de autos, se desprende que el horario de las cámaras se encuentra desfasado por una hora, con relación al horario real), por lo que entonces, el horario de entrada, realmente sería a las **09:33:50**; reforzándose con ese dato, la debida actuación de **PP1** y **PP2**, elementos de la Dirección de Seguridad Pública que practicaron la detención del ahora occiso, al no advertirse una dilación en su traslado a las instalaciones de la corporación. En ese sentido, no existe mayor controversia en cuanto al horario de ingreso del

ahora occiso, ya que la diferencia de 3 minutos y 50 segundos, no repercute en el resultado fatal del caso que nos ocupa.

45. Entonces pues, retomando el referido informe de autoridad rendido por **SJ2** y por **SJ1**, otrora Síndica Municipal y ex Director de Seguridad Pública de Fresnillo, Zacatecas, se tiene que, al ser cuestionado sobre los hechos, **AR1**, manifestó que no le impuso sanción alguna al señor **VD†** debido a que primeramente verificaría si este contaba con alguna orden de aprehensión, a efecto de notificar a las autoridades correspondientes y, solo entonces, calificar si había incurrido o no en la comisión de alguna falta administrativa, siendo ese también el motivo por el cual no ordenó su certificación médica.

46. Aunado a ello, del análisis de la entrevista de fecha 23 de diciembre de 2021 que el citado ex funcionario proporcionara al **PI1**, elemento de la Policía de Investigación de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, con motivo de la integración de la carpeta de investigación […], esta Comisión advierte que éste no difiere en su versión. Esto es, en dicha entrevista, el ex servidor público manifestó de manera genérica que luego de que se realizaran los trámites administrativos para el ingreso de **VD†**, éste le solicitó realizar algún servicio social para poder salir de **"su arresto"**, razón por la cual, le informó que primeramente checaría su estatus legal en Plataforma México y, posteriormente, determinaría su situación jurídica. Asimismo, explicó que el señor **VD†** fue ingresado a la celda número 2 del área de separos y, alrededor de las **11:20 horas**, se percató de que **AR2** solicitaba apoyo de paramédicos, percatándose entonces que el detenido recibía primeros auxilios por parte de elementos de la corporación, debido a que se encontraba colgado en la celda, y que había hecho uso de su sudadera para ello.

47. En esa misma fecha, el ex funcionario público explicó al personal de este Organismo que, a pesar de que notó desesperado a **VD†**, le explicó que primeramente se investigaría su situación jurídica en Plataforma México, para así determinar la sanción que le podía imponer, siendo ese el motivo por el cual no impuso dicha sanción de manera inmediata. Además de ello, justificó su omisión para ordenar la certificación médica del ahora occiso, aduciendo que la Dirección de Seguridad Pública no cuenta con médico, por lo que los certificados médicos se realizan cuando éste acude; empero, no especificó si en el caso concreto, realizó llamada a dicho galeno para que certificara al detenido, con todo y que lo mantuvo en separos desde su ingreso, a las **09:33:50 horas**, hasta las **11:10 horas** (hora en que, según la inspección de los videos de vigilancia practicada por este Organismo, el detenido atentó contra su vida).

48. Lo anterior, es claramente violatorio del derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica de **VD†**, lo que, en el caso, se actualizó mediante la detención arbitraria a la que fue sometido por **AR1**, al no ajustarse dicha detención a los procedimientos previstos para ello (aspecto formal). Para ello, es viable citar el contenido del artículo 32 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, primeramente, en lo que concierne al cómputo del arresto y a la obligación de la autoridad administrativa de imponer sanción la correspondiente, derivada de la comisión de faltas administrativas. Así, se tiene que el párrafo séptimo de dicho precepto, estatuye de manera clara que el arresto de una persona, comenzará a computarse desde el momento mismo de la detención, en la especie, las **09:16:54 horas**; luego, el mismo párrafo, contiene la obligación para la autoridad que efectúe la detención, de poner a disposición de la autoridad competente al detenido, dentro del término máximo de **3 horas**, contadas desde el momento de la detención; lo cual, en el caso específico se cumplió por **PP1** y **PP2**, elementos de la Dirección de Seguridad Pública de Fresnillo, Zacatecas, según se evidenció en párrafos anteriores. Mientras que, la autoridad administrativa, en este caso, **AR1**, de acuerdo con el contenido de dicho artículo y párrafo, contaba con **2 horas** para imponer la sanción que, en su caso, mereciera **VD†**.

49. Ahora bien, con relación a las sanciones que **AR1**, pudo haber aplicado a **VD†**, el contenido del artículo 21, párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es coincidente con el párrafo sexto del referido artículo 32 de la Constitución Local, en cuanto a que entre las sanciones que pueden imponerse por la comisión de faltas administrativas por infracciones a bandos municipales, se encuentran la **multa** y el **arresto hasta por 36 horas**, siendo que la Norma Federal amplía las posibilidades, al agregar la figura de **trabajo en favor de la comunidad**; y en el caso de la Ley de Justicia Comunitaria

del Estado de Zacatecas, recordemos que ésta precisa en su numeral 21 que, además de la multa y el arresto, se podrá aplicar como sanción una **amonestación.**

50. Lo anterior, es indicativo de que, en una estricta observancia del principio *pro personae*, que permite la posibilidad de elegir de entre más de una norma jurídica susceptible de aplicarse a un caso concreto, aquella que sea menos restrictiva de derechos humanos, siempre con el ánimo de tutelar de manera más amplia las prerrogativas del gobernado, **AR1**, tenía la posibilidad de imponer cualquiera de las 4 sanciones enumeradas en el párrafo antecedente, a **VD†**. Sin embargo, como ya se evidenció, optó por actuar de manera ilegal, ordenando su ingreso a los separos preventivos, pese a que éste le solicitó realizar "servicio social", ello, con el único objetivo de investigar la situación jurídica de éste en Plataforma México. Lo cual, además de ser contrario a las normas constitucionales y legales precitadas, las cuales no prevén que se tenga que agotar dicha indagación previo a determinar la sanción administrativa que el caso amerite, contraviene lo estipulado por el párrafo primero del señalado artículo 32 de la Constitución Local, que prohíbe de manera atajante detener a una persona con fines de investigación, lo que en el caso aconteció, según reconoció el propio **AR1.**

51. Aunado a ello, este Organismo nota que, ni del informe de autoridad que en su momento rindieron **SJ2** y **SJ1**, ex Síndica Municipal y ex Director de Seguridad Pública de Fresnillo, Zacatecas, con relación a los hechos materia de esta Recomendación, ni del contenido de las entrevistas que el ex funcionario concedió y cuya conducta se analiza, se advierte que se haya garantizado el derecho al debido proceso de **VD†**. Omisión que, en el caso del actuar de quienes ostentan el cargo de Juez Calificador de la Dirección de Seguridad Pública de Fresnillo, Zacatecas, se hizo notar en los casos de las Recomendaciones **07/2021** y **19/2021**, en las cuales se hizo énfasis en el hecho de que tales servidores públicos, conceden total crédito al dicho de los elementos captores, una vez que ponen a su disposición a las personas detenidas.

52. En el caso concreto, dicha circunstancia se advierte de manera clara de las propias manifestaciones que realizó **AR1**, quien detalló tanto al personal de la Policía de Investigación, como al de esta Comisión, que el ahora occiso había sido detenido por haber agredido a una persona del sexo femenino, dato que asentó en el libro de registro de detenidos de la corporación, del que esta Institución obtuvo copia. Empero, de dichos elementos probatorios, no se deduce que el ex funcionario municipal, haya concedido siquiera el uso de la voz a **VD†** para alegar en su favor; lo que, evidentemente, denota el desacato por parte del ex funcionario, en cuanto a las obligaciones que, en el ámbito jurídico interno, impone el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de protección, defensa, promoción y garantía de los derechos humanos.

53. Es decir, los estándares internacionales de derechos humanos, imponen a las autoridades de un Estado, la obligación de observar las garantías mínimas del debido proceso. Garantías que, de acuerdo con los criterios sustentados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, son obligatorias no solo para autoridades jurisdiccionales, sino que, además, se extienden a autoridades administrativas, como es el caso, pues éstas, se refieren *al conjunto de requisitos que deben observarse en instancias procesales a efecto de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Es decir, cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea administrativo, sancionatorio o jurisdiccional, debe respetar el proceso legal.* De manera que la amplitud en el desarrollo de este derecho se justifica también en la interpretación del Tribunal según la cual, las garantías del artículo 8.1 de la Convención superan los casos tradicionales de la jurisdicción penal, e incluso los procesos estrictamente judiciales.[32]

54. En ese sentido, cuando la Convención Americana sobre Derechos Humanos se refiere al derecho de toda persona a ser oída por un "juez o tribunal competente" para la "determinación de sus derechos", esta expresión hace alusión a cualquier autoridad pública,

[32] STEINER, Christian y otros, La Convención Americana sobre Derechos Humanos comentada, SCJN/Fundación Konrad Adenauer, Programa Estado de Derecho para América Latina, 2014, pág. 227.

sea administrativa –colegiada o unipersonal–, legislativa o judicial, “que mediante sus resoluciones pueda determinar derechos y obligaciones de las personas”, esto es, el referido artículo 8.1 de la Convención, no se aplica restrictivamente a jueces y tribunales judiciales”, sino también a los que pese a no serlo formalmente, actúen como tal, y si bien a dichas autoridades no se les exigen garantías propias de un órgano jurisdiccional, éstas sí deben cumplir con las garantías necesarias para que su decisión no sea arbitraria.[33]

55. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante jurisprudencia por reiteración, sustentó el siguiente criterio con número de registro 2005716, que sirve de apoyo a los anteriores argumentos:

> **“DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO. Dentro de las garantías del debido proceso existe un "núcleo duro", que debe observarse inexcusablemente en todo procedimiento jurisdiccional, y otro de garantías que son aplicables en los procesos que impliquen un ejercicio de la potestad punitiva del Estado**. Así, en cuanto al "núcleo duro", las garantías del debido proceso que aplican a cualquier procedimiento de naturaleza jurisdiccional **son las que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha identificado como formalidades esenciales del procedimiento, cuyo conjunto integra la "garantía de audiencia", las cuales permiten que los gobernados ejerzan sus defensas antes de que las autoridades modifiquen su esfera jurídica definitivamente**. Al respecto, el Tribunal en Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 47/95, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, diciembre de 1995, página 133, de rubro: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.", sostuvo que **las formalidades esenciales del procedimiento son: (i) la notificación del inicio del procedimiento; (ii) la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; (iii) la oportunidad de alegar; y, (iv) una resolución que dirima las cuestiones debatidas y cuya impugnación ha sido considerada por esta Primera Sala como parte de esta formalidad**. Ahora bien, **el otro núcleo es identificado comúnmente con el elenco de garantías mínimo que debe tener toda persona cuya esfera jurídica pretenda modificarse mediante la actividad punitiva del Estado, como ocurre, por ejemplo, con el derecho** penal, migratorio, fiscal o **administrativo, en donde se exigirá que se hagan compatibles las garantías con la materia específica del asunto**. Por tanto, **dentro de esta categoría de garantías del debido proceso, se identifican dos especies:** la primera, que corresponde a todas las personas independientemente de su condición, nacionalidad, género, edad, etcétera, **dentro de las que están, por ejemplo, el derecho a contar con un abogado,** a no declarar contra sí mismo o **a conocer la causa del procedimiento sancionatorio;** y la segunda, que es la combinación del elenco mínimo de garantías con el derecho de igualdad ante la ley, y que protege a aquellas personas que pueden encontrarse en una situación de desventaja frente al ordenamiento jurídico, por pertenecer a algún grupo vulnerable, por ejemplo, el derecho a la notificación y asistencia consular, el derecho a contar con un traductor o intérprete, el derecho de las niñas y los niños a que su detención sea notificada a quienes ejerzan su patria potestad y tutela, entre otras de igual naturaleza” (Sic).
>
> Lo resaltado en negritas, es de esta Comisión.

56. Se observa entonces que, la actuación desplegada por órganos y autoridades con funciones de carácter materialmente jurisdiccional tiene límites infranqueables, entre los que, indudablemente, el respeto de los derechos humanos ocupa el nivel primordial, por lo que, en consecuencia, su actuación debe encontrarse debidamente regulada por la legislación interna de los Estados parte de la Convención, de manera precisa, para evitar cualquier arbitrariedad de su parte.[34] Lo cual, a criterio de este Organismo Constitucional Autónomo, no fue atendido por **AR1** otrora Juez Calificador, adscrito a la Dirección de Seguridad Pública de Fresnillo, Zacatecas, quien, en fecha 23 de diciembre de 2019, conoció de la detención de **VD†**. Ya que, además de conceder valor probatorio pleno al dicho de los elementos captores, determinó su ingreso a los separos preventivos, con el único fin de verificar su

[33] Ídem, pág. 231.
[34] Ídem, pág. 233.

situación jurídica en Plataforma México, cuando las disposiciones jurídicas no establecen dicha condición, previo a calificar una falta administrativa, causando con ello una vulneración a su derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica, en relación con el derecho a no ser objeto de detenciones arbitrarias. Criterio que se respalda con el que, a su vez, sustentó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante la siguiente tesis aislada, con número de registro 238355:

> **"AUDIENCIA Y SEGURIDAD JURÍDICA, GARANTÍAS DE. ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA DE BIENES O DERECHOS. DISTINCIÓN. ARTÍCULOS 14 Y 16 CONSTITUCIONALES.** En los términos del artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Federal, **la audiencia previa a la emisión del acto de autoridad y el debido proceso legal, como garantías del gobernado, son de observancia obligatoria únicamente tratándose de actos privativos**, sea de la vida, **de la libertad,** de propiedades, posesiones o derechos de los particulares más no así cuando se trata de actos de molestia que no tengan la finalidad de privar al afectado de alguno de sus bienes o derechos, pues tales actos se rigen solamente por la garantía de seguridad jurídica (fundamentación y motivación) que establece el artículo 16 constitucional" (Sic).
>
> Lo resaltado en negritas, es de esta Comisión.

57. En ese entendido, esta Institución resuelve que, **AR1** otrora Juez Calificador, adscrito a la Dirección de Seguridad Pública de Fresnillo, Zacatecas, es responsable del quebranto a la esfera de derechos fundamentales de **VD†**. Lo cual, se concretó con la inobservancia de garantizar en su favor las formalidades esenciales del procedimiento, pues como ya se dijo, ordenó su ingreso a separos preventivos con fines de investigación. Lo cual, a juicio de este Organismo, no se ciñe a los estándares internacionales, tornándose dicha detención, además de ilegal, arbitraria; y, por ende, se actualiza el incumplimiento de las obligaciones de garantía, protección y defensa de los derechos humanos, en estricto apego a lo dispuesto por el artículo 1°, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, en concordancia con los instrumentos internacionales invocados en la presente Recomendación. Así como, con los criterios sustentados por los Tribunales Internacionales aludidos y, con el de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, vulnerando en su perjuicio, su derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica, en relación con su derecho a no ser objeto de detenciones arbitrarias.

B. Derecho a la integridad personal y a la vida, en relación con el deber del Estado garante de las personas privadas de su libertad.

I. De la posición del Estado, como garante de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.

58. Esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, ha hecho hincapié en el deber del del Estado, como garante de los derechos humanos de las personas; fundamentalmente, de los grupos en situación de vulnerabilidad, como es el caso de las personas privadas de su libertad. Motivo por el cual, es preciso apuntar que, dicho deber, tiene como base principal el reconocimiento de la dignidad inherente al ser humano, por lo que el pleno respeto a los derechos humanos de todas las personas, debe regirse bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, conforme lo dispuesto por el artículo 1°, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

59. Bajo esa lógica, es posible afirmar que, el irrestricto respeto a la dignidad humana constituye un límite a la actividad estatal, válido para todo órgano o funcionario que se encuentre en una situación de poder frente a las personas. Así, en caso de que el Estado prive de manera legal a una persona de su libertad, asume una responsabilidad especial, relacionada con el respeto y la garantía de sus derechos humanos; ya que, tanto la seguridad, como la integridad de éstas, quedan bajo su custodia.

60. Lo anterior, habida cuenta de que, el Estado, tiene una posición especial de garante respecto de las condiciones de reclusión de dichas personas y, por consiguiente, tiene la obligación de vigilar porque tales condiciones, sean compatibles con su dignidad humana. En ese sentido, es posible afirmar que, tal obligación, no se materializa con la mera provisión de servicios básicos, sino que debe hacerse patente mediante el establecimiento de recursos y

la implementación de medidas que aseguren la tutela efectiva de los derechos humanos de las y los internos.

61. Relativo a lo anterior, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha sintetizado la importancia de dicha obligación, bajo la siguiente premisa:

> *"La proclamación de derechos sin la provisión de garantías para hacerlos valer queda en el vacío. Se convierte en una formulación estéril, que siembra expectativas y produce frustraciones. Por ello es preciso establecer las garantías que permitan reclamar el reconocimiento de los derechos, recuperarlos cuando han sido desconocidos, restablecerlos si fueron vulnerados y ponerlos en práctica cuando su ejercicio tropieza con obstáculos indebidos". [35]*

62. Con base en ello, el propio Tribunal Interamericano, ha reiterado en diversas ocasiones que, la mayoría de las muertes de personas privadas de su libertad, que suceden al interior de los centros penitenciarios o establecimientos de detención de la región, guardan estrecha relación con las condiciones de violencia interna, resultante de la falta de prevención y atención oportuna de las autoridades penitenciarias. En tanto que, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias, ha señalado que, las autoridades mexicanas, no han abordado de manera adecuada el problema de autogobierno en los centros de reclusión, e incluso, se mantienen al margen del asunto, ya sea por temor o por complicidad[36].

63. Así las cosas, recordando el derecho a la vida es aquel *"respecto del cual no se autoriza suspensión alguna, ni siquiera en situaciones excepcionales"*[37]; mientras que, el derecho a la integridad personal *"es aquél que tiene todo sujeto para no sufrir tratos que afecten su estructura corporal, sea física, fisiológica o psicológica, o cualquier otra alteración en el organismo que deje huella temporal o permanente, que cause dolor o sufrimiento grave con motivo de la injerencia o actividad dolosa o culposa de un tercero"*[38], puede concluirse que, desde la perspectiva de los derechos humanos, las personas internas deben recibir el mismo respeto a su dignidad humana que aquél que deben recibir las personas en libertad.

64. Por consiguiente, este Organismo Autónomo, tal como lo ha sustentado en los documentos recomendatorios precitados, y en concordancia con la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sostiene que, **la reclusión no tiene que imponer mayores restricciones al disfrute de los derechos humanos que las que devienen de la propia privación de la libertad.** Motivo por el cual, la vida, e integridad moral, física, sexual y psicológica de todas las personas internas, deberá ser salvaguardada por la autoridad penitenciaria de forma reforzada, garantizando, manteniendo y, en su caso, restableciendo el orden y la paz dentro de los establecimientos carcelarios, utilizando para ello los protocolos aplicables, y con apoyo de las herramientas, los mecanismos y el equipo necesarios disponibles para el cumplimiento de sus atribuciones.

65. Bajo ese contexto, atendiendo a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el entendido de que para establecer que se ha producido una violación al derecho a la vida, no se requiere determinar la culpabilidad de sus autores o su intencionalidad, y tampoco es preciso identificar individualmente a los agentes a quienes se atribuyen los hechos violatorios, ya que resulta suficiente demostrar que se han verificado acciones u omisiones, que hayan permitido la perpetración de esas violaciones, o que exista una obligación del Estado que haya sido incumplida; resultó factible que esta Comisión conociera de los hechos en que perdiera la vida **VD†**, pues los hechos acontecieron mientras se encontraba detenido en los separos de la Dirección de Seguridad Pública de Fresnillo, Zacatecas, bajo la custodia del Estado.

---

[35] CIDH, *El acceso a la justicia como garantía de los derechos económicos, sociales y culturales. Estudio de los estándares fijados por el sistema interamericano de derechos humanos*, OE A/Ser.L/V/II .129 Doc. 4, cidh/oea, 7 de septiembre de 2007, párr. 183, disponible en: http://cidh.org/pdf%20files/acceso%20a%20la%justicia%desc.pdf

[36] Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, *Propuesta General 1/2018, La ejecución penal desde los derechos humanos,* pág. 42.

[37] Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Observación General núm. 6. Derecho a la vida, HRI/GEN/1/ Rev.9, aprobada en el 16º periodo de sesiones, 30 de abril de 1982, párr. 1.

[38] Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Recomendación 69/2016, de fecha 28 de diciembre de 2016.

66. Lo anterior, significa que, nuestra intervención es posible en virtud a la atribución de investigar las posibles violaciones a derechos humanos, atribuidas a autoridades estatales y municipales, ya sea que tales violaciones sean por acción o por omisión, como en la especie ocurrió. Motivo por el cual, en el caso motivo de análisis, se procede primeramente a establecer la obligación del Estado, como garante de los derechos de las personas privadas de su libertad, para, enseguida, realizar el estudio detallado del derecho a la vida y del derecho a la integridad personal, conculcados en perjuicio del ahora occiso. En otros términos, toda vez que la muerte de **VD†**, puede representar por omisión, una vulneración a su derecho a la vida y a su integridad personal, su deceso se estima atribuible, indirectamente, al personal adscrito a la Dirección de Seguridad Pública de Fresnillo, Zacatecas, en virtud a que, en su calidad de servidores públicos representantes del Estado, su obligación consiste en garantizar los derechos humanos de todas las personas internas bajo su custodia, incluido desde luego, el derecho a la vida, con base en los argumentos hasta aquí expuestos.

67. En ese entendido, debemos partir de qué significa el término "garante". Para ello, es dable decir que, la raíz etimológica de dicho término proviene del vocablo francés *"garant"* que, a su vez, viene de la palabra germánica *"Warren"*, que significa: *"hacerse responsable, asegurar"*. En términos legales, la figura del garante se configura por aquel que se compromete a responder por otra persona[39]. Persona con la obligación jurídica de garantizar un derecho a un titular[40]. Entonces pues, frente a las personas privadas de libertad, el Estado se encuentra en una posición especial, reforzada, de garante, toda vez que las autoridades […] ejercen un fuerte control o dominio, frente a las personas que se encuentran bajo su custodia[41].

68. En consecuencia, una vez que el deceso de una persona privada de la libertad ha ocurrido, el Estado debe actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar los actos que se sospeche que fueron cometidos por personas o entidades privadas.[42] Pues en caso contrario, podría incurrir en responsabilidad; lo cual, es imperativo en los casos de suicidios y homicidios ocurridos dentro de las cárceles y centros penitenciarios bajo su jurisdicción. Motivo por el cual, se reitera, la obligación de este Organismo, en la especie, consiste en investigar la responsabilidad de las autoridades involucradas, en la vulneración del derecho a la vida e integridad personal de **VD†**, persona que en fecha 23 de diciembre de 2019, ingresó a los separos de la Dirección de Seguridad Pública de Fresnillo, Zacatecas, lugar donde horas después, perdió la vida.

69. Luego entonces, es pertinente mencionar que, la muerte de personas privadas de libertad en los centros de reclusión o espacios de detención temporal, en muchas ocasiones se producen como resultado de la falta de prevención y de adopción de medidas adecuadas para mitigar la amenaza.[43] Motivo por el cual, en el caso concreto y de acuerdo con las obligaciones descritas en párrafos antecedentes, este Organismo nota que, los servidores públicos por razones de su cargo de custodia, vigilancia, protección y seguridad de las personas, debieron cumplir con la encomienda derivada de la ley para evitar que **VD†** perdiera la vida; lo cual, evidentemente no previeron siendo una situación que sí es predecible, con lo cual se violentó el deber de cuidado que objetivamente era necesario que observaran.

70. Al respecto, recordemos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que el Estado en virtud de su deber de garante de las personas privadas de la libertad "debe prestar atención prioritaria a la prevención del suicidio, lo que implica reducir al

---

[39] Obtenido de: http://conceptodefinicion./d/
[40] Obtenido de: http://popjuris.com/dicionario/definicion-de/garante/
[41] Corte IDH, Caso *Instituto de Reeducación del Menor* Vs. Paraguay. Sentencia de 2 de septiembre de 2004 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), párr.152.
[42] Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Observación General núm. 31. Naturaleza de la obligación jurídica general impuesta a los Estados Partes en el Pacto, CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, aprobada en el 80º periodo de sesiones, 29 de marzo de 2004, párr. 8.
43 CIDH. Informe sobre los derechos humanos de las personas privadas de libertad en las Américas. OEA, aprobado por la CIDH el 31 de diciembre de 2011, párr. 285. Consultado en: https://www.oas.org/es/cidh/ppl/docs/pdf/ppl2011esp.pdf, en fecha 14 de abril de 2020.

máximo los posibles factores de riesgo."[44] En este sentido algunas de las medidas que el Estado debe realizar con la finalidad de garantizar la integridad personal y la vida de las personas privadas de la libertad, derivadas de la lectura integral de los artículos 1.1 4.1 y 5 de la Convención Americana sobre derechos humanos, son las siguientes[45]:

> a) Practicar un examen médico inicial a toda persona que ingresa en un centro de reclusión, en el cual se debe observar si la persona privada de la libertad representa un peligro para sí misma. Los centros de reclusión deben tener un programa de prevención de suicidios.
> b) Entrenamiento adecuado del personal […] (de salud y de custodia) en la detención y tratamiento de posibles casos de suicidio;
> c) Establecimiento de políticas y procedimientos claramente articulados para la supervisión continua y el tratamiento de las personas internas que se consideran están en riesgo de suicidarse;
> d) Mantenimiento de un entorno físico seguro que reduzca las posibilidades de emplear mecanismos para el suicidio; en el que, por ejemplo, se eliminen o reduzcan los puntos de colgamiento y el acceso de las personas privadas de la libertad a materiales letales; y en el que se adopten medios de vigilancia eficientes.

71. En el caso de esta Recomendación, esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas encontró que, personal de la Dirección de Seguridad Pública de Fresnillo, Zacatecas, incurrió en omisiones que vulneraron los derechos humanos del señor **VD†**, cuando éste perdió la vida al interior de los separos preventivos de la mencionada Dirección, donde se encontraba detenido. Asimismo, de la revisión de dichos separos preventivos realizada por personal adscrito a esta Comisión, en fecha 23 de diciembre de 2019, se pudo constatar que, en dicha Dirección, a pesar de que se cuenta con un médico contratado para que examine a las personas al momento de ser detenidas e ingresadas en los separos preventivos, al momento del ingreso del agraviado, éste no se encontraba presente y, el Juez Calificador que conoció de los hechos, omitió notificarle de manera inmediata sobre el ingreso de dicha persona, a fin de que acudiera y realizara su respetiva certificación médica; situación que les impidió prever escenarios de riesgo y que provocaron que la persona detenida perdiera la vida.

72. En lo atinente, las Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos[46], establece que todos los establecimientos penitenciarios o lugares donde se lleve a cabo la detención de personas, deberán disponer de los servicios de un médico calificado que cuente con algunos conocimientos psiquiátricos, y se a efecto de proporcionar al detenido un servicio psiquiátrico para su diagnóstico y, si fuere necesario, para el tratamiento de los casos de enfermedades mentales, además de disponer del traslado de los enfermos cuyo estado requiera cuidados especiales, a establecimientos de retención especializados o a hospitales civiles. De la misma manera, dicho instrumento jurídico estatuye que, el médico, deberá examinar a cada recluso tan pronto sea posible después de su ingreso y, posteriormente, tan a menudo como sea necesario, en particular para determinar la existencia de una enfermedad física o mental, y tomar en su caso, las medidas necesarias.
73. Por su parte, las Reglas Mínimas de la Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela), menciona en su artículo 24 que, "[l]a prestación de servicios médicos a los reclusos es una responsabilidad del Estado; además de que los

---

44 CIDH. Informe sobre los derechos humanos de las personas privadas de la libertad en las Américas. OEA, aprobado por la CIDH el 31 de diciembre de 2011, párr. 321. Consultado en: https://www.oas.org/es/cidh/ppl/docs/pdf/ppl2011esp.pdf, en fecha 14 de abril de 2020.
45 CIDH. Informe sobre los derechos humanos de las personas privadas de libertad en las Américas. OEA, aprobado por la CIDH el 31 de diciembre de 2011, párr. 321; Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las personas privadas de libertad en las Américas, aprobado por la CIDH en su 131 período ordinario de sesiones, celebrado del 3 al 14 de marzo del 2008, principio IX.3; Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de las Personas Privadas de Libertad; adoptada por la Asamblea General de la ONU en su resolución 45/113 de 14 de diciembre de 1990, regla 50; Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión, adoptado por la Asamblea General de la ONU en su resolución 43/173 de 9 de diciembre de 1988, principio 24, 25, 34; Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos, aprobados por el Congreso Económico y Social en sus resoluciones 663 del 31 de julio de 1957 y 2076 del 13 de mayo de 1977, reglas 7, 24, 84 – 93.
46 Adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en 1955, y aprobadas por el Consejo Económico y Social en sus resoluciones 663C (XXIV) de 31 de julio de 1957 y 2076 (LXII) de 13 de mayo de 1977, apartado 22 al 26.

reclusos gozarán de los mismos estándares de atención sanitaria que estén disponibles en la comunidad exterior y tendrán acceso gratuito a los servicios de salud necesarios sin discriminación por razón de su situación jurídica", y que "[l]os servicios médicos se organizarán en estrecha vinculación con la administración del servicio de salud pública general y de un modo tal que se logre la continuidad exterior del tratamiento y la atención, incluso en lo que respecta al VIH, la tuberculosis y otras enfermedades infecciosas, y la drogodependencia"[47].

74. Se observa entonces que, en el caso de personas privadas de su libertad, bajo la custodia del Estado, sea en centros de detención temporal o establecimientos penitenciarios, la salvaguarda de sus derechos fundamentales, debe ejercerse por el Estado bajo un estándar de deber reforzado; implementando todas les medidas que sean necesarias para evitar que, por acción o por omisión, sus agentes, incurran en acciones u omisiones que atenten contra el derecho a la vida e integridad.

II. Del derecho a la vida.

75. Este Organismo Constitucional Autónomo, ha reiterado que, el derecho a la vida ocupa un lugar especial en la lista de los derechos fundamentales de la persona[48]. Tanto así que, pese a que la Doctrina afirma que todos los derechos humanos tienen igual valor[49], a la hora de examinar casos concretos de violaciones de este derecho, los Organismos Internacionales y Regionales competentes, no ponen en tela de juicio, la necesidad de destacar el carácter especial del derecho a la vida. Bajo esa perspectiva, el derecho a la vida se estima como prerrequisito para el disfrute de todos los demás derechos humanos.[50] Dicho, en otros términos, es un derecho fundamental, esencial, sin el cual resulta imposible el disfrute de otros derechos o libertades, pues éstos, carecerían de sentido ante la desaparición de la persona titular del derecho; por ello, el derecho a la vida, como inseparable de toda persona, involucra que nadie puede ser privado de la vida de forma arbitraria. Dicho derecho, se encuentra reconocido en diversos instrumentos internacionales y regionales, firmados y ratificados por el Estado Mexicano[51].

76. De este modo, mediante su Observación General sobre el artículo 6, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Comité de Derechos Humanos, calificó al derecho a la vida como: *"el derecho supremo respecto del cual no se autoriza suspensión alguna, ni siquiera en situaciones que pongan en peligro la vida de la nación".*[52] Aunado a ello, en un caso relativo a la pena de muerte, analizado en 1993, el propio Comité, sostuvo lo siguiente:

> *"El punto de partida de un examen de esta cuestión debe ser la obligación el Estado parte (…) de garantizar los derechos reconocidos en el Pacto a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción. El derecho a la vida es el más esencial de estos derechos".*[53]

77. A partir de entonces, el Comité ha reiterado en sus resoluciones, de manera textual, que: *"El derecho a la vida es el más esencial de estos derechos"*[54]. Por su parte, la Corte

---

47 Reglas Mínimas de la Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela). Asamblea General, resolución 70/175, anexo, aprobado el 17 de diciembre de 2015.

48 Ver, por ejemplo, las Recomendaciones 01/2020, 21/2021 y/o 28/2021.

49 Ver, por ejemplo, el siguiente pasaje de la Declaración de Viena, adoptado por la segunda Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos, celebrada en Viena en 1993: *"Todos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes y están relacionados entre sí. La comunidad debe tratar los derechos humanos en forma global de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y dándoles a todos la misma importancia."* (párr. 5).

50 Corte IDH, *Caso Espinoza González* vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2014. Serie C. No. 289, párr. 205.

51 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, art. 133. "Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de las entidades federativas.

52 Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Observación General No. 6, párr. 1 (1982).

53 Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, *Caso Kindler* vs. Canadá, párr. 13.1 (énfasis agregado).

54 Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, *Caso A.R.J.* vs. Australia, párr. 6.8 (1997); G.T. c. Australia, párr. 8.1 (1998).

Interamericana de Derechos Humanos, utilizando un lenguaje más sutil y cuidadoso en los casos en que ha abordado dicho tópico, sostuvo, en la Opinión Consultiva 16/99, que: "*Si el debido proceso legal, con su conjunto de derechos y garantías, debe ser respetado en cualesquiera circunstancias, su observancia es aún más importante cuando se halle en juego el supremo bien que reconocen y protegen todas las declaraciones y tratados de derechos humanos: la vida humana".*[55]

78. Mientras tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, también ha reconocido de manera enfática el carácter especial del derecho a la vida. En una decisión, adoptada en 1996, sostuvo lo siguiente:

> *"(…) la Comisión Interamericana de Derechos Humanos debe destacar (…) que el derecho a la vida entendido como un derecho fundamental de la persona humana consagrado en la Declaración Americana y en diversos instrumentos internacionales a escala regional y universal, tiene el estatus de jus-cogens."*[56]

79. Asimismo, la Comisión explicó que, el concepto de *juscogens*, "*se deriva de un orden superior de normas establecidas en tiempos antiguos y que no pueden ser contravenidas por las leyes del hombre o de las naciones."* [57] En adición a lo anterior, este Organismo destaca el hecho de que, en una decisión más reciente, la Comisión Interamericana precisó que: "*El derecho a la vida es ampliamente reconocido como el derecho supremo del ser humano y conditio sine qua non para el goce de todos los demás derechos."*[58] Así, se tiene que, el derecho a la vida se encuentra reconocido, en el ámbito universal, por el artículo 3°, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y por el numeral 6.1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Instrumentos que establecen de forma genérica que toda persona tiene derecho a la vida, sin condicionar este derecho a si la persona se encuentra o no privada de su libertad. Aunado a ello, el Comité de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, resolvió, a través de la Observación General número 6, que el derecho a la vida es un derecho supremo respecto del cual, no se autoriza suspensión alguna. Dado su carácter inviolable, el derecho a la vida forma parte del *iuscogens*[59] y conforma un núcleo inderogable, al encontrarse consagrado como uno de los derechos que no admiten suspensión en casos de guerra, peligro público u otras amenazas a la independencia o seguridad de los Estados[60].

80. Por otro lado, en contexto regional, el derecho a la vida se encuentra previsto en el artículo 1°, de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, así como en el artículo 4°, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en términos similares a los señalados en el párrafo anterior. Adicionalmente, los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, establecen que, el respeto al derecho a la protección de la vida, no puede ser objeto de suspensión alguna. Correlativamente, en el marco jurídico interno, el derecho a la vida se encuentra consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyas normas se encaminan a reconocer la conservación y la protección de la vida humana. Lo cual, ha sido sustentado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tras el análisis integral y extensivo de lo estipulado por los artículos 1°, 14 y 22 constitucionales, de los cuales, sostuvo nuestro Máximo Tribunal, se desprende la protección de este derecho[61].

81. En ese tenor, es posible concluir que, las obligaciones del Estado, respecto de la garantía del respeto a la vida, se clasifican de la siguiente manera:

---

[55] Corte IDH, Opinión Consultiva OC-16/99, párr. 135.
[56] Oficina en México, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Escuela de Graduados en Administración Pública y Política Pública, México, D.F., septiembre de 2007, pág. 100.
[57] Corte IDH, *Caso Remolcadora* 13 de marzo, párr. 79 (1996). Ver también Sequieras Mangas c. Nicaragua, párr. 145. (1997). La CIDH hace una exégesis de la relación y las diferencias entre los conceptos de derecho consuetudinario y de *jus cogens* en los párrafos 43 a 50 de su decisión en el C*aso Domínguez* vs. Estados Unidos (2002).
[58] Corte IDH, *Caso Edwards* y otros vs. Bahamas, párr. 109 (2001).
[59] Corte IDH. Informe No. 47/96, Caso 11.436: Caso *Víctimas del Barco Remolcador "13 de marzo"* vs Cuba, 16 de octubre de 1996, párr.79.
[60] Corte IDH. *Caso Galdeón García* vs Perú. Sentencia de 6 de abril de 2006. Serie C. No.147, párr. 32.
[61] Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tesis jurisprudencial 13/2002: DERECHO A LA VIDA, SU PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Febrero de 2002, pág. 589.

> a) Negativas: implican una abstención, un "no hacer" o una no intervención y,
> b) Positivas: requieren de un "hacer" por parte del Estado; esto es, de la adopción e implementación de medidas, a través de sus diversas instituciones y agentes, para su debido cumplimiento; es decir, para proteger y preservar la vida, garantizando el pleno y libre ejercicio de los derechos de todas las personas bajo su jurisdicción.[62]

82. De esta manera, en lo concerniente al derecho a la vida, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al pronunciarse sobre su garantía, ha sostenido que:

> *"…no solo presupone que ninguna persona sea privada de su vida arbitrariamente (obligación negativa), sino que además requiere, a la luz de su obligación de garantizar el pleno y libre ejercicio de los derechos humanos, que los Estados adopten todas las medidas apropiadas para proteger y preservar el derecho a la vida (obligación positiva), de quienes se encuentren bajo su jurisdicción. Esta protección activa del derecho a la vida por parte del Estado no solo involucra a sus legisladores, sino a toda institución estatal y a quienes deben resguardar la seguridad, sean éstas, fuerzas de policía o sus fuerzas armadas"*[63].

83. En ese entendido, este Organismo considera que, cuando existe una omisión de salvaguardar la vida de personas detenidas bajo la custodia del Estado, por falta de vigilancia de las autoridades penitenciarias, se actualiza el incumplimiento de su deber reforzado de cuidado, en su calidad de garante. Es decir, en lo que concierne al derecho a la vida de las personas privadas de su libertad, el Estado se encuentra en una posición especial de garante, motivo por el cual, su obligación de salvaguardar este derecho es aún mayor, por lo que debe asegurarse de proporcionar condiciones mínimas que sean compatibles con el respeto a la dignidad humana. Consecuentemente, el Estado tiene el deber de prevenir todas aquellas situaciones que pudieran conducir, por acción o por omisión, a la supresión de dicho derecho. [64]

84. En cuanto al deber del Estado, como garante de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad, este Organismo considera oportuno puntualizar que, la jurisprudencia universal e interamericana, también reconoce la **responsabilidad del Estado por omisión** debido a la desprotección de los presos y la inatención a sus necesidades básicas. Una de las primeras decisiones al respecto, ampliamente citada en la jurisprudencia posterior, es la emitida por el Comité de Derechos Humanos en el *Caso Dermit vs. Uruguay*. En ese caso, luego de 8 años de prisión, y cuando estaba a punto de obtener su libertad para establecer su residencia en un país de asilo, la víctima murió repentinamente en su celda. **El Estado alegó suicidio** y proporcionó al Comité una copia de la autopsia, **pero no explicó las circunstancias de la muerte,** las cuales, por lo visto, no fueron objeto de una investigación. El denunciante, un pariente de la víctima, presentó evidencias de que la hipótesis de suicidio era inverosímil. El Comité consideró al Estado responsable por la muerte, independientemente de que hubiera sido homicidio o suicidio, justificando su decisión de la siguiente manera:

> *"(…) si bien el Comité no puede llegar a una conclusión definitiva sobre si Hugo Dermis cometió suicidio, fue impulsado a cometerlo o fue muerto de otro modo mientras estaba encarcelado,* ***la conclusión ineludible es que, en cualquier circunstancia, las autoridades uruguayas fueron responsables, por acción u omisión, de no haber adoptado medidas adecuadas para proteger su vida*** *conforme exige el párrafo 1 del artículo 6 del Pacto".*[65]

Las negritas, son de esta Comisión.

85. Con base en lo hasta aquí expuesto, es posible advertir que, el Estado estará obligado a rendir cuentas del tratamiento dado a la persona que falleció bajo su custodia[66]. Ya que,

---

[62] Corte IDH. Caso Myma Mack Chang vs. Guatemala. Fondo. Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2003, párr.153.
[63] Corte IDH. *Caso Vargas Areco* vs. Paraguay. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C. No. 155 párr. 75.
[64] Corte IDH. Informe sobre los derechos humanos de las personas privadas de libertad en las Américas. OEA, aprobado por la Corte IDH, el 31 de diciembre de 2011, párr. 270.
[65] Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, *Caso Dermit* vs. Uruguay, párr. 9.2.
[66] Corte IDH. Informe sobre los derechos humanos de las personas privadas de libertad en las Américas. OEA, aprobado por la CIDH, el 31 de diciembre de 2011, párr. 270: Corte IDH. Caso Cárcel de Urso Branco respecto

cuando una persona es detenida en un estado óptimo de salud, o en condiciones que no impliquen un riesgo inminente a su vida y, con posterioridad muere por causas distintas, incluyendo el suicidio o el descuido de la persona a la que se encomendó su vigilancia, recae en el Estado, el deber de brindar una respuesta satisfactoria y convincente de lo acontecido. Y, en su caso, desvirtuar las alegaciones sobre su responsabilidad, mediante medios de convicción válidos; tomando en cuenta que existe una presunción de responsabilidad estatal sobre lo que ocurra a una persona bajo custodia del Estado.

86. Se concluye entonces que, según lo disponen los ordenamientos jurídicos precitados, el Estado, en su posición de garante de los derechos fundamentales de sus gobernados, está obligado a adoptar las medidas necesarias para proteger y garantizar el derecho a la vida de las personas que se encuentran recluidas en algún centro de detención. Pues no debe soslayarse el hecho de que, la muerte de personas privadas de libertad en centros de reclusión o espacios de detención temporal es consecuencia de la falta de prevención y adopción de las medidas adecuadas para mitigar una situación de riesgo o amenaza. Motivo por el cual, deberán implementarse las acciones preventivas necesarias para evitar que, por acción u omisión, se suprima este derecho.

87. Con relación a tales medidas, el Tribunal Interamericano ha determinado que, para proteger y garantizar el derecho a la vida de las personas privadas de la libertad, éstas abarcan desde aquéllas que favorecen la conservación de un clima de respeto a los derechos humanos, hasta aquellas dirigidas a proteger a los internos de la violencia que pueda suscitarse entre ellos. Pues dichos actos de violencia representan una situación de riesgo inminente tanto para la vida de las personas recluidas, como para la de cualquier persona que se encuentre en dichos establecimientos. Por lo tanto, el Estado debe tener la capacidad de mantener el orden y la seguridad al interior de los centros penitenciarios y así, garantizar la seguridad de las y los internos en todo momento, así como de las personas que los visitan y de las propias que laboran en ellos.

88. En línea con lo anterior, en el contexto interno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ha pronunciado sobre el deber del Estado como garante de los derechos de las personas privadas de su libertad, y ha sostenido que*: "además de la prohibición a la privación de la vida, el Estado tiene la obligación en el ámbito legislativo, judicial y administrativo de adoptar medidas positivas para preservar la existencia, por lo que se considera transgresión al derecho a la vida no sólo cuando una persona es privada de ésta, sino también cuando se omite adoptar las medidas aludidas para preservarla o para minimizar el riesgo de que la pierda a manos del Estado o de otros particulares*.[67]

89. Bajo ese entendido, se advierte que las autoridades estatales, están obligadas a realizar todas aquellas acciones necesarias para garantizar y preservar la vida de las personas bajo su control, cuidado y custodia. Por tanto, el Estado se encuentra compelido a prevenir de manera razonable aquellas situaciones de riesgo que pudieran conducir, aún por omisión, a la supresión de la inviolabilidad del derecho a la vida; ya sea por otros particulares o por servidores públicos.

C. Del derecho a la integridad personal.

90. Esta Comisión Estatal, asume como suyo el criterio sustentado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el sentido de que, el derecho a la integridad personal, es aquél que tiene todo sujeto para no sufrir tratos que afecten su estructura corporal, sea física, fisiológica o psicológica, o cualquier otra alteración en el organismo que deje huella temporal o permanente, que cause dolor o sufrimiento grave con motivo de la injerencia o actividad dolosa o culposa de un tercero. Dicho criterio, fue asumido por el Organismo Nacional, mediante el contenido de la Recomendación 69/2016, de fecha 28 de diciembre de 2016 y es compartido por este Organismo Autónomo, debido a que abarca aspectos relacionados con el derecho a la integridad y a la dignidad de la persona.

Brasil. Medidas Provisionales. Resolución del 18 de junio de 2002, Considerando 8; European Court of Human Rigths. Case of Salman v Turkey. Application 21986//93. Judgment of june 27, 2000. Grand Chamber.

[67] Tesis aislada P. LXI/2010, Derecho a la vida. Supuestos en que se actualizará su transgresión por parte del Estado. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época, t. XXXIII, enero 2011, pág. 24.

91. Motivo por el cual, es oportuno enfatizar que, a pesar de que ni la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ni la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, o el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconocen expresamente el derecho a la integridad personal como tal; es evidente que la integridad personal es el bien jurídico cuya protección constituye el fin y objetivo principal de la prohibición de tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanas o degradantes, previstas en el artículo 5, de la Declaración Universal y 7 del Pacto. Por lo tanto, si relacionamos las disposiciones anteriores, con el contenido del artículo 3°, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que establece que, todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona; se puede inferir que, de dicho precepto, se desprende que la obligación de velar por el respeto y garantía de los derechos humanos corresponde al Estado, como ente garante de éstos.

92. Por su lado, la Declaración Americana de Derechos Humanos, no sólo carece de una disposición que reconozca el derecho a la integridad personal, sino que también adolece de una prohibición expresa de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. No obstante, como ya se indicó en líneas precedentes, su primer artículo consagra el derecho de toda persona a la vida, la libertad y a la seguridad de su persona. Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que el concepto de seguridad personal comprende la integridad personal, a guisa de ejemplo, conviene citar el siguiente razonamiento:

> *"(…) que la tortura física o moral no se justifica en modo alguno, por ser atentatoria contra la dignidad humana y viola la integridad de la persona, cuya defensa está consagrada en el artículo 1 de la Declaración Americana".*[68]

93. En tanto que, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sí consagra expresamente el derecho a la integridad personal y hace un aporte valioso a la definición de su contenido, al precisar que comprende la integridad física, psíquica y moral, mediante el texto del artículo 5.1. Aunado a ello, el derecho a la integridad, la prohibición de tortura y los derechos de los reclusos a un trato digno y humano están plasmados en distintos párrafos del artículo 5 de la mencionada Convención. Y, como resultado de lo anterior, mediante el precepto 1.1 dicho instrumento compromete a los Estados a asumir el compromiso de respetar los derechos y libertades reconocidos en ella, así como de garantizar su libre y pleno ejercicio, a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna.

94. Dichas obligaciones generales de respeto y garantía de los derechos humanos, vinculantes para el Estado con respecto a toda persona, implican para éste un mayor nivel de compromiso al tratarse de personas en situación de riesgo o vulnerabilidad.[69]Tan es así que, aunado a las normas que tutelan la integridad de toda persona, la normativa internacional establece otras que tienen el objetivo de proteger la integridad de las personas privadas de libertad. De esta manera, el párrafo 2 del artículo XXV de la Declaración Americana, el párrafo 1 del artículo 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el párrafo 2 del artículo 5 de la Convención Americana consagran el derecho genérico a un trato humano, lo que se traduce un trato respetuoso de la dignidad de la persona humana. Los dos tratados también contienen normas más específicas relativas al trato de distintas categorías de reclusos, en particular la separación de reclusos según su condición jurídica, sexo y edad, y la rehabilitación de reos condenados.

95. Lo anterior, significa que, mientras que el derecho genérico a un trato humano es reconocido en cuanto derecho de toda persona privada de libertad, las demás disposiciones sobre el trato de reclusos son derechos propios de personas privadas de libertad por motivos de índole penal. En lo atinente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos al resolver el caso "Loayza Tamayo", citó una sentencia de la Corte Europea, y manifestó su acuerdo con la conclusión de dicho Tribunal, consistente en que:

> *"La infracción del derecho a la integridad física y psíquica de las personas es una clase de violación que tiene diversas connotaciones de grado y que abarca desde la tortura hasta otro tipo de vejámenes o tratos crueles, inhumanos o degradantes*

---

[68] CIDH, *Diez años de actividades*, pp. 337. Véase también el informe de la CIDH sobre la situación de los solicitantes de asilo en Canadá, infra.

[69] CIDH, Informe sobre los derechos humanos de las personas privadas de libertad en la Américas, párr. 46.

> *cuyas secuelas físicas y psíquicas varían de intensidad según los factores endógenos y exógenos que deberán ser demostrados en cada situación concreta."* [70]

96. En ese orden de ideas, es dable señalar que, el derecho de las personas privadas de libertad a ser tratadas humanamente y con el debido respeto a la dignidad inherente a su persona, constituye el derecho cuya alegada violación origina más denuncias. En cuanto a ello, en 1992 el Comité de Derechos Humanos, adoptó una nueva Observación General sobre el artículo 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y destacó que el derecho a un trato digno y humano, no se limita a los presos, sino que se extiende a toda persona privada de libertad *"en virtud de las leyes y la autoridad del Estado"*[71]. Aunado a ello, el Comité sostuvo que el derecho a un trato digno y humano es un añadido a los demás derechos fundamentales de la persona, los cuales deben reconocerse y respetarse en la medida en que los requisitos legítimos de la privación de libertad lo permiten; motivo por el cual *"las personas privadas de libertad gozan de todos los derechos enunciados en el Pacto sin perjuicio de las restricciones inevitables en condiciones de reclusión."* [72]

97. Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en coincidencia con el Comité, mediante su decisión en el caso Edwards, consideró responsable al Estado no sólo del derecho de los presos a un trato humano, sino también del derecho de toda persona a la salud, consagrado por el artículo XI de la Declaración Americana de Derechos Humanos.[73] Dicho principio, ha sido reiterado y ampliado por la propia Comisión en decisiones recientes, mediante las cuales ha sustentado que: "*las normas mínimas establecidas en conformidad con los artículos [sic] 5(1) y 5(2) de la Convención (…) se aplican sin tener en cuenta la naturaleza del comportamiento por el cual la persona en cuestión ha sido encarcelada independientemente del nivel de desarrollo del Estado (…)".*[74] Además, la Comisión también destacó la importancia del derecho a la integridad, al resolver el caso Támez contra Brasil, y sostuvo que el derecho a la integridad y al trato digno, es uno de los más importantes predicados de la responsabilidad internacional de los Estados en relación con los derechos humanos el velar por la vida y la integridad física y mental de las personas bajo su custodia.

98. Tal es el estado de vulnerabilidad e institucionalización en el que se ven colocadas las personas privadas de libertad, que los Estados han propiciado la elaboración de un número importante de instrumentos normativos para la salvaguarda específica de sus derechos fundamentales, siendo los más relevantes: las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos de 1955 (Reglas Nelson Mandela), el Conjunto de Principios para la Protección de todas las Personas Sometidas a Cualquier forma de Detención o Prisión de 1988, los Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos de 1990, la Declaración de Arusha sobre Buenas Prácticas Penitenciarias, y las Reglas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de las Reclusas y Medidas No Privativas de la Libertad para las Mujeres Delincuentes (Reglas de Bangkok), entre otras.

99. En lo que atañe al derecho a la integridad, las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos (Nelson Mandela), el Conjunto de Principios para la Protección de todas las Personas Sometidas a Cualquier forma de Detención o Prisión y los Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos, establecen en forma genérica que, cualquier persona privada de la libertad, ya sea que se encuentre detenida, arrestada o compurgando una pena de prisión, será tratada con pleno respeto a la dignidad humana. Correlativamente, el Conjunto de Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, reconocen que todas las personas privadas de su libertad que estén sujetas a la jurisdicción de un Estado deberán ser tratadas humanamente, con absoluto respeto a su dignidad personal, derechos y garantías fundamentales. De manera adicional, dicho instrumento establece la obligación del Estado consistente en proteger a

---

[70] Corte IDH, *Caso Loayza Tamayo*, párr. 57.
[71] Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Observación General No. 21, que sustituy la No. 9 de 1982.
[72] Ídem.
[73] Corte IDH, *Caso Edwards y otros* vs. Barbados, párr. 194 (2001).
[74] Corte IDH*, Caso Knights y otros* vs. Jamaica, párr. 126 (citando las decisiones de la Corte Europea en el caso Ahmed c. Australia y del Comité de Derechos Humanos en Mukong c. Camerún). Ver también Edwards c. Barbados, párr. 194.

éstas contra todo tipo de amenazas, actos o conductas que tengan como finalidad anular la personalidad o disminuir la capacidad física o mental de la persona.[75]

100. Así pues, con relación a la obligación del Estado como garante de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad, éste es el sujeto obligado a proteger el derecho a la vida y a la integridad personal, por lo que al ser también responsable de los establecimientos de detención, es el garante de estos derechos de los detenidos.[76] Tan es así que, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha sostenido de manera reiterada que, de las obligaciones generales de respetar y garantizar los derechos, derivan deberes especiales, determinables en función de las particulares necesidades de protección del sujeto de derecho, ya sea por su condición personal o por la situación específica en que se encuentre.[77]

101. Igualmente, la Corte ha sustentado el criterio de que, frente a las personas privadas de su libertad, el Estado se encuentra en una posición especial y reforzada de cuidado, toda vez que las autoridades penitenciarias, ejercen un fuerte control o dominio sobre las personas que se encuentran sujetas a su custodia. De este modo, se produce una relación e interacción especial de sujeción entre la persona privada de libertad y el Estado, caracterizada por la privativa intensidad con que el Estado puede regular sus derechos y obligaciones y por las circunstancias propias del encierro, en donde al recluso se le impide satisfacer por cuenta propia una serie de necesidades básicas que son esenciales para el desarrollo de una vida digna.[78]

102. Bajo dicha perspectiva, este Organismo Autónomo concluye que, cuando el Estado priva de la libertad a una persona, asume una responsabilidad especial relacionada con el respeto y la garantía de sus derechos; ya que, tanto la seguridad como la integridad de éstas, queda bajo su custodia. Al respecto, la Corte Interamericana ha establecido que existen derechos como la vida, la integridad, el debido proceso, entre otros, cuya limitación o restricción se encuentra proscrita, bajo el entendido de que, toda persona privada de su libertad tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con la dignidad inherente al ser humano y, por ende, el Estado debe garantizarle el derecho a la vida y a la integridad personal. Lo anterior, hace factible concluir que, el Estado, como responsable de los establecimientos de detención, es el garante de tales derechos en favor de las personas detenidas.[79]

103. En el caso particular del Estado Mexicano, a partir de la reforma constitucional del año 2011, mediante el texto del artículo 1°, párrafos, primero y tercero, de la Constitución General de la República, se definió claramente la obligación del Estado garante, respecto de la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos, al indicar que *"todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece."*[80] Consecuentemente, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Por consiguiente, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.[81]

104. Luego entonces, en el marco constitucional interno, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contempla que el respeto a los derechos humanos es un pilar fundamental de nuestro sistema normativo; por lo tanto, se puede concluir que, el Estado es

---

[75] Principio 1 del Conjunto de Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de la Libertad en las Américas.
[76] Corte IDH, *Caso Neira Alegría y otros* vs. Perú, Sentencia de 19 de enero de 1995, párr. 60.
[77] Corte IDH, *Caso Vélez Loor* vs. Panamá, Sentencia de 23 de noviembre de 2010 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), párr. 98
[78] Ídem, párr.152.
[79] Corte IDH, *Caso Neira Alegría* y otros vs. Perú, Sentencia de 29 de enero de 1995, Serie C No. 20, párr. 60.
[80] Ídem, art.1°.
[81] Ídem.

el garante de la seguridad de quienes se encuentren bajo su custodia en los centros penitenciarios del país, así como en cualquier establecimiento de detención.[82] Entonces pues, una de las funciones primordiales del Estado, será garantizar el respeto a los derechos humanos de todas las personas que se encuentren sujetas a cualquier forma de detención. Bajo esa premisa, se advierte que, el Estado, tiene la obligación de salvaguardar los derechos de las personas privadas de su libertad, sin perjuicio de las restricciones inevitables asociadas a las condiciones de reclusión; pues, al encontrarse éstas bajo su resguardo, no hay ni puede haber ninguna razón para que éste, se sustraiga de su deber perentorio de tutelar la vida e integridad de las personas que se hallan sujetas a su control, y que carecen por sí mismas, de capacidad efectiva de autodeterminación y defensa.

105. Respecto a este tema, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que, la responsabilidad del Estado, respecto a garantizar el derecho a la integridad de las personas privadas de su libertad. Además, en el Caso Tibi vs. Ecuador, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que, el Estado tiene además el deber de investigar, sancionar y reparar toda violación a este derecho cometido en perjuicio de las personas que se encuentran bajo su custodia.

106. Por lo cual, debe de iniciar de oficio y de manera inmediata una investigación efectiva que permita identificar, juzgar y sancionar a los responsables de dichas agresiones. Por consiguiente, *"el Estado es responsable de la observancia del derecho a la vida de toda persona bajo su custodia, precisamente en su condición de garante de los derechos consagrados en la Convención Americana; ya que, como lo ha señalado este Tribunal, si bien el Estado tiene el derecho y la obligación de garantizar su seguridad y mantener el orden público, su poder no es ilimitado, pues tiene el deber, en todo momento, de aplicar procedimientos conformes a Derecho y respetuosos de los derechos fundamentales, a todo individuo que se encuentre bajo su jurisdicción".*[83]

107. En conclusión, este Organismo estima pertinente destacar que el Estado, como garante de los derechos fundamentales de los gobernados, tiene la obligación de prevenir aquellas situaciones que pudieran conducir, incluso por acción u omisión, a la supresión de la inviolabilidad del derecho a la vida y a la integridad personal. Lo cual implica que, si una persona es detenida en buen estado de salud y posteriormente muere, recae en el Estado la obligación de proveer una explicación satisfactoria y convincente de lo sucedido y desvirtuar las alegaciones sobre su responsabilidad, mediante elementos probatorios válidos, pues en su posición de garante, el Estado tiene tanto la responsabilidad de garantizar los derechos del individuo bajo su custodia, como la de proveer la información y las pruebas relacionadas con el destino que ha tenido la persona detenida.[84]

D. De la violación del derecho a la vida e integridad personal, en perjuicio de VD.

108. En el caso concreto, este Organismo recopiló evidencias suficientes que acreditan que, el Estado, incumplió con su función reforzada como ente garante de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad; específicamente, en agravio del señor **VD†**, pues se tiene debidamente comprobado que su deceso aconteció mientras se encontraba detenido en los separos de la Dirección de Seguridad Pública de Fresnillo, Zacatecas, precisamente, bajo la custodia del Estado, según se desprende de las constancias que integran el sumario. Vulneración que se atribuye de manera directa a la omisión en la garantía y protección de dichos derechos por parte de **AR1**, quien en fecha 23 de diciembre de 2019, ocupaba el cargo de Juez Calificador adscrito a la Dirección de Seguridad Pública de Fresnillo, Zacatecas en el turno de las **08:00 a 20:00 horas**, así como a **AR2** personal de la Policía Preventiva de dicho Municipio que, en esa misma fecha, se encontraban encargado de turno en el área de separos de dicha Corporación

109. Motivo por el cual, como ya se apuntó anteriormente, esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, en su calidad de Órgano de Estado, responsable de la

---

[82] Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Recomendación 04/2016 de fecha 25 de febrero de 2017, párr. 29.
[83] Corte IDH, *Caso Juan Humberto Sánchez* vs. Honduras, Sentencia de 7 de junio de 2003, párr. 111
[84] Ídem.

protección y defensa de los derechos humanos en el territorio zacatecano, cumplió con su obligación constitucional de investigar los hechos; al advertir que la muerte del señor **VD†** se debió a la omisión en el deber de cuidado que debieron haber cumplido los funcionarios municipales adscritos a la citada Dirección, que se encontraban de turno en fecha 23 de diciembre de 2019 al mando del **SJ1**, quien en ese momento ostentaba el cargo de Director de Seguridad Pública del referido Municipio; pues el sometimiento o especial sujeción en el que se encontraba el agraviado, no justifica de ningún modo, el detrimento o menoscabo de sus derechos fundamentales, como en el caso sucedió con la supresión de su derecho a la vida.

110. Luego entonces, en cumplimiento a lo ordenado por la regla 71 de las Reglas Mandela[85], disposición que mandata que, con independencia de que se inicie investigación interna, el Director de cualquier centro penitenciario o establecimiento de detención deberá notificar sobre el fallecimiento, desaparición o lesión grave de un interno a una autoridad judicial, u otra que sea competente e independiente de la que administre el centro, siempre y cuando cuente con facultades de investigación, el **SJ1**, entonces Director de Seguridad Pública de Fresnillo, Zacatecas, notificó el fallecimiento de **VD†** a este Organismo, así como a la Representación Social.

111. Así las cosas, de conformidad con lo ordenado por los diversos instrumentos jurídicos que sustentan la presente Recomendación, y, además, con fundamento en el Principio 34, del Conjunto de Principios para la Protección de todas las Personas Sometidas a Cualquier forma de Detención o Prisión[86], se inició la investigación de los hechos. Además, esta Comisión verificó que, en cumplimiento a dichos instrumentos jurídicos, la Representación Social también inició su respectiva indagatoria. Lo cual, se corrobora con el acta de aviso de hechos probablemente constitutivos de delito, elaborada las **12:42** horas del día 23 de diciembre de 2019, signada por **PI1**, elemento de la Policía de Investigación, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas; originándose la carpeta de investigación marcada con el número […], actualmente a cargo de la Agente del Ministerio Público, adscrita a la Unidad Especializada en Investigación Mixta número 4, del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas.

112. En este sentido, este Organismo advierte el incumplimiento de la Regla 69[87], de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela), no solo por parte de la autoridad directamente involucrada, sino también por parte del Ministerio Público. Veamos, la obligación de notificar de manera inmediata a los familiares del agraviado sobre su lamentable deceso, recaía en **SJ1**, otrora Director de Seguridad Pública de Fresnillo, Zacatecas, como responsable de las instalaciones policíacas

---

[85] Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, 1. “Sin menoscabo de que se inicie una investigación interna, el director del establecimiento penitenciario comunicará sin dilación todo fallecimiento, desaparición o lesión grave de un recluso a una autoridad judicial u otra autoridad competente que sea independiente de la administración del establecimiento penitenciario y esté facultada para llevar a cabo investigaciones expeditas, imparciales y efectivas de las circunstancias y causas de ese tipo de ca sos. La administración del establecimiento penitenciario cooperará plenamente con esa autoridad y garantizará la preservación de todas las pruebas. 2. La obligación enunciada en el párrafo 1 de esta regla se aplicará igualmente siempre que existan motivos razonables para considerar que en el establecimiento penitenciario se ha cometido un acto que constituya tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, independientemente de que se haya recibido o no una denuncia formal. 3. Siempre que existan motivos razonables para considerar que se ha cometido alguno de los actos mencionados en el párrafo 2, se tomarán medidas de inmediato para velar por que ninguna persona que pudiera estar involucrada participe en la investigación o mantenga contacto con los testigos, la víctima o la familia de esta”.

[86] “Si una persona detenida o presa muere o desaparece durante su detención o prisión, un juez u otra autoridad, de oficio o a instancias de un miembro de la familia de esa persona o de alguna persona que tenga conocimiento del caso, investigará la causa de la muerte o desaparición. Cuando las circunstancias lo justifiquen, se llevará a cabo una investigación iniciada de la misma manera cuando la muerte o desaparición ocurra poco después de terminada la detención o prisión. Las conclusiones de esa investigación o el informe correspondiente serán puestos a disposición de quien lo solicite, a menos que con ello se obstaculice la instrucción de una causa penal en curso”.

[87] Ídem, Regla 69. “En caso de fallecimiento de un recluso, el director del establecimiento penitenciario informará inmediatamente a sus familiares más allegados o a la persona designada como contacto para casos de emergencia. Ante un supuesto de enfermedad o lesión grave o de traslado de un recluso a un centro hospitalario, el director deberá notificar a las personas que el recluso haya designado para recibir información relacionada con su estado de salud. Se respetará la solicitud expresa Primera parte, del recluso de que no se informe a su cónyuge o familiar más cercano en caso de enfermedad o lesión”.

donde **VD†** perdió la vida. Empero, de ninguna de las constancias que integran el expediente que motiva este instrumento recomendatorio, principalmente del informe de autoridad que rindiera de manera conjunta con la ex Representante Jurídica del Ayuntamiento, se deduce que dicho servidor público, haya notificado a **VI1** o a **VI2** sobre el deceso de su hijo.

113. Por otro lado, esta Comisión toma nota de que, a **VI1** y a **VI2**, madre y padre del agraviado, les fueron recabadas comparecencias por el Ministerio Público el mismo 23 de diciembre de 2019, a las **18:15 horas**, es decir **5 horas y 33 minutos después** de haber iniciado la investigación, si consideramos que el acta de aviso de hechos se elaboró a las **12:42 horas** de ese mismo día. Aunado a ello, en la entrevista brindada a este Organismo en fecha 22 de septiembre de 2020, precisaron de manera puntual que, pese a que se apersonaron en la Casa de Justicia de Fresnillo, Zacatecas, desde las **14:00 horas**, les negaron información relacionada con la muerte de su hijo, y no fue sino hasta alrededor de las **20:00** horas que se les notificó de manera tajante que su hijo sí se encontraba ahí, pero, sin vida.

114. Luego entonces, la omisión anteriormente evidenciada, por parte del **SJ1**, otrora Director de Seguridad Pública de Fresnillo, Zacatecas, se insiste, se contrapone a las disposiciones de la Regla 69 de las Reglas Mandela, las cuales imponen de manera concreta, su obligación de notificar de manera inmediata a los familiares cuando una persona fallece en los separos de la Corporación a su cargo, como en el caso ocurrió, de manera lamentable, con **VD†**. Mientras que, por parte del personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, este Organismo reprueba la forma insensible en que se dio a conocer a los padres de éste su deceso, aunado al hecho de haberlos mantenido por horas (al menos por 4 horas con 15 minutos, si se retoma el horario en que afirmaron haber llegado a la Casa de Justicia y la hora en que se les recabó comparecencia) sin recibir ningún tipo de información.

115. Ahora bien, en lo que atañe a la omisión de **AR1** otrora Juez Calificador, adscrito a la Dirección de Seguridad Pública de Fresnillo, Zacatecas, para ordenar la certificación médica del señor **VD†**, bajo el pretexto de que la Dirección no cuenta con médico y, por lo tanto, los certificados se realizan cuando el galeno acude; este Organismo encuentra que, en contraposición a sus afirmaciones, la **AC2**, Coordinadora de Recursos Humanos de la Presidencia Municipal de Fresnillo, Zacatecas informó que el médico de guardia que se encontraba de turno el 23 de diciembre de 2019, fue el **DR1**. Además, mediante comparecencia vertida ante personal encargado del trámite de la queja, el galeno concedió crédito a la información proporcionada por la Coordinadora de Recursos Humanos y explicó que, el día de los hechos, se encontraba de turno, y que al momento de ingresar el agraviado, él estaba en su horario de tomar alimentos y había salido de la Dirección a comprar comida, empero, aclaró que nadie le notificó sobre el ingreso del ahora occiso a las instalaciones de la corporación; ya que, cuando así sucede (que sale a comprar alimentos), si ingresa alguna persona, es notificado de manera inmediata, sin que en el caso ello aconteciera.

116. La versión del citado médico, adquiere credibilidad si tomamos en consideración que, **AR1**, otrora Juez Calificador, adscrito a la Dirección de Seguridad Pública de Fresnillo, Zacatecas, manifestó que ordenó el ingreso del señor **VD†** para verificar su situación jurídica previo a determinar qué sanción le impondría, siendo ese también el motivo por el cual no había sido certificado por un médico, según se informó por la Síndica Municipal y el ex Director de Seguridad Pública, mediante informe rendido con motivo de los hechos que motivan esta Recomendación.

117. Luego entonces, este Organismo arriba a la conclusión de que, si bien se encuentra probado que al momento del ingreso del señor **VD†** a las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública de Fresnillo, Zacatecas, el **DR. DR1**, no se encontraba presente, la obligación de **AR1** era notificarle de manera inmediata a fin de que se hiciera presente y procediera a la certificación médica del detenido; máxime si recordamos que, de su propia manifestación al personal de la Policía de Investigación encargado de la indagación de los hechos, se desprende que habría notado “desesperado” al agraviado. Cumplir con dicha obligación, implica la debida tutela del derecho a la integridad física y psicológica de

cualquier persona detenida, pues al ser debidamente valorados por un profesional de la salud, es posible identificar factores de riesgo que incidan en el hecho de que las personas sometidas a detención, puedan atentar contra su vida o contra la de otras personas detenidas.

118. Sin embargo, en el caso concreto, **AR1** privilegió en todo momento la facultad punitiva del Estado, por encima del respeto y garantía de los derechos humanos, pues como él mismo reconoció, ordenó el ingreso del señor **VD†** a separos preventivos, con la única finalidad de corroborar que éste no contara con alguna orden de aprehensión vigente. Cuando lo que debió hacer, era incoar el procedimiento previsto por la Ley de Justicia Comunitaria para calificar las faltas administrativas que, en su caso, hubiere cometido; no obstante, incumplió con dicha obligación, inclusive, como ya se dijo antes, concediendo total crédito al dicho de los elementos captores, estableció en el libro de registro de detenidos de la corporación, que el agraviado había sido detenido por haber agredido a una persona del sexo femenino; empero, no remitió a esta Comisión el documento que acredite el procedimiento instaurado para arribar e dicha conclusión.

119. Ahora bien, tomando en consideración la indivisibilidad e independencia de los derechos humanos, este Organismo se pronuncia también respecto de la íntima relación que existe entre la protección del derecho a la salud y la integridad física de las personas; ya que, el quebranto de cualquiera de éstos, incide forzosamente en el otro. En el caso que nos ocupa, por la naturaleza del asunto, debemos hacer énfasis en las obligaciones del Estado, de preservar el derecho a la protección de la salud, de las personas privadas de la libertad, pues cuando no se cuenta con un médico que examine a las personas al momento de ser detenidas e ingresadas en los separos preventivos, se genera una situación que les impide prever escenarios de riesgo en dichas personas, y que provocan, como en el caso de estudio, que la persona detenida perdiera la vida, al no proporcionársele el trato adecuado, respecto a su condición.

120. Al respecto y con relación al tema que nos ocupa, importa señalar que, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través del Informe sobre los derechos humanos de las personas privadas de libertad en las Américas, se pronunció respecto de las medidas que el Estado debe realizar con la finalidad de garantizar la integridad personal y la vida de las personas privadas de la libertad, mismas que se derivan de la lectura integral de los artículos 1.1 4.1 y 5 de la Convención Americana sobre derechos humanos, encontrándose entre éstas la de **practicar un examen médico inicial a toda persona que ingresa en un centro de reclusión**, en el cual se debe observar si la persona privada de la libertad representa un peligro para sí misma.

121. Por otra parte, las Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos, estatuye que todos los establecimientos penitenciarios o lugares donde se lleve a cabo la detención de personas, deberán disponer de los servicios de un médico calificado que cuente con algunos conocimientos psiquiátricos, a efecto de proporcionar al detenido un servicio psiquiátrico para su diagnóstico y, si fuere necesario, para el tratamiento de los casos de enfermedades mentales, además de disponer del traslado de los enfermos cuyo estado requiera cuidados especiales, a establecimientos de retención especializados o a hospitales civiles. Del mismo modo, el documento de referencia establece que, el médico deberá examinar a cada recluso tan pronto sea posible después de su ingreso y posteriormente, tan a menudo como sea necesario, en particular para determinar la existencia de una enfermedad física o mental, y tomar en su caso, las medidas necesarias.

122. Finalmente, las Reglas Mínimas de la Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela), menciona en su artículo 24 que, “[…] la prestación de servicios médicos a los reclusos es una responsabilidad del Estado. Los reclusos gozarán de los mismos estándares de atención sanitaria que estén disponibles en la comunidad exterior y tendrán acceso gratuito a los servicios de salud necesarios sin discriminación por razón de su situación jurídica”, y que “[…] los servicios médicos se organizarán en estrecha vinculación con la administración del servicio de salud pública general y de un modo tal que se logre la continuidad exterior del tratamiento y la atención, incluso en lo que respecta al VIH, la tuberculosis y otras enfermedades infecciosas, y la drogodependencia”.

123. Por lo que, en ese sentido, esta Comisión resuelve que, con la omisión de ordenar la certificación médica del señor **VD†**, **AR1** otrora Juez Calificador de la Dirección de Seguridad Pública de Fresnillo, Zacatecas, incurrió también en la violación de su derecho a la protección de la salud y de su derecho a la integridad física, con el consecuente menoscabo de su derecho a la vida, derechos que, en su calidad de agente del Estado, debió tutelar bajo un estándar reforzado, en atención al estado de vulnerabilidad e institucionalización en la cual se encontraba el agraviado. Por consiguiente, dicho funcionario es responsable de manera directa, de causar el menoscabo del derecho a la integridad personal y a la vida, en relación con el deber del Estado garante de las personas privadas de su libertad, en agravio de **VD†**.

124. Ahora, procedamos a analizar el actuar de **AR2**, elemento de la Dirección de Seguridad Pública de Fresnillo, Zacatecas, que se encontraba de turno en el área de separos de la Corporación en fecha 23 de diciembre de 2019, según lo informó al personal de este Organismo; indicando también que la última vez que vio con vida a **VD†** fue a las **10:00 horas**, aclarando que él lo había estado revisando, pero que luego se puso a trapear, limpiar y desayunar y no fue sino hasta aproximadamente las **11:20 horas** que lo encontró sin vida. Tales datos, coinciden con la información aportada al sumario por la Síndica Municipal de Fresnillo, Zacatecas, de manera conjunta con el ex Director de la Corporación, pues en el informe rendido a esta Comisión, precisaron que **AR2** aseguró que, la última vez que vio con vida al señor **VD†** fue aproximadamente a las **10:00 horas**, además de que especificó que, cuando se encuentran personas detenidas, el personal de guardia realiza recorridos por el área de separos aproximadamente cada media hora. Luego entonces, si tomamos en consideración que el agraviado ingresó a la celda número 2 a las **09:33:50**, de acuerdo al contenido de los videos de vigilancia proporcionados por el **SJ1**, otrora Director de Seguridad Pública, es posible establecer que, **AR2** habría efectuado por lo menos un recorrido por el área de separos.

125. No obstante, en entrevista concedida a personal de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, **AR2** manifestó información completamente diferente, pues aseguró que luego de que el agraviado ingresara a la celda número 2, acudió a “checarlo” cada **10 o 15** minutos, observando a **VD†** tranquilo, sentado; asimismo, manifestó que el horario en que encontró sin vida al ahora occiso lo fue entre las **11:00 y 11:15 horas**; omitiendo en dicha entrevista, el que se hubiere dispuesto a limpiar, trapear y consumir alimentos, así como que la última vez que vio con vida al agraviado, lo fue a las **10:00 horas** aproximadamente.

126. Ahora bien, de la inspección de los videos de las cámaras de seguridad ubicadas en las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública de Fresnillo, Zacatecas, que fueran remitidas a este Organismo por el entonces Director de la Corporación, no se advierte que, luego de que **VD†** ingresara a la celda en la cual fue interno, **AR2** haya realizado rondín en ninguno de los lapsos que mencionó; es decir, ni cada **10 o 15** minutos, ni cada **30**, como aseguró en diversas ocasiones. Del video señalado con la nomenclatura **ch09_20191223082911**, correspondiente al área de celdas, este Organismo pudo constatar que, el ingreso del agraviado a la celda número 2 de separos, de acuerdo al horario del video, que como ya se aclaró, se encuentra desfasado con una hora, lo fue a las **09:43:19**; por lo que si el video concluye a las **10:04:54**, entonces **AR2** debió haber ingresado al pasillo de celdas por lo menos en una ocasión; sin embargo, desde el ingreso del agraviado a la celda, y hasta la conclusión del video, no se observa que ninguna persona entre a verificar el estado del ahora occiso, y, lo que sí se aprecia es que un elemento policiaco, se encuentra realizando labores de limpieza en el pasillo que conduce a las celdas, pero, del otro lado de la reja que se encuentra a la entrada de dicha área.

127. Luego, del análisis de los videos con nomenclatura **ch09_20191223094130** (con duración de **36:01**) y **ch09_20191223101731** (con duración de **35:43**) que también corresponden al área de celdas, este Organismo tampoco advierte que persona alguna ingrese al área de celdas para vigilar el estado en el que se encontraba **VD†**. Por lo cual, es posible establecer la falsedad con la que se condujo el **AR2** en sus diversas manifestaciones, ya que, de haber vigilado de manera constante a**. VD†**, ya fuese cada **30, 15 o 10** minutos, se habría podido percatar de que, transcurridos **10:08:04**, según se

desprende del video con nomenclatura **ch05_20191223095405**, correspondiente al acceso motos, éste comenzó a realizar maniobras para, finalmente, perder la vida, transcurridos **10:12:25**. Finalmente, se tiene que, de la inspección del video realizada el mismo 23 de diciembre de 2019, correspondiente al área de separos de la Dirección de Seguridad Pública de Fresnillo, Zacatecas, el personal actuante pudo dar fe de que el horario en el cual **AR2** ingresó a dicha área y se percató de que el agraviado ya había perdido la vida, lo fue a las **11:12 horas**.

128. Entonces pues, es posible establecer que, desde las **09:43:19** hasta las **11:12 horas** del día 23 de diciembre de 2019, **VD†** permaneció en el interior de la celda número 2 de los separos de la Dirección de Seguridad Pública de Fresnillo, Zacatecas, con nula vigilancia por parte de **AR2**, persona que, en esa fecha, era la encargada de vigilarlo, según se desprende del informe de autoridad que rindieron de manera conjunta la **SJ2** y el **SJ1**, otrora Síndica Municipal y ex Director de Seguridad Pública de Fresnillo, Zacatecas; así como de las entrevistas que él mismo concediera tanto al personal de este Organismo, como al de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas. De moto tal que, dicho elemento, incurrió en la grave omisión de salvaguardar de manera reforzada el derecho a la integridad y a la vida del agraviado desde su posición de agente del Estado, por lo cual, resulta responsable de la vulneración de dichos derechos humanos, en agravio de **VD†**.

129. Aunado a ello, de acuerdo con la información provista por el **AC3**, Titular del Departamento de Protección Civil y Bomberos de Fresnillo, Zacatecas, se deduce que siendo las **12:11** horas del día 23 de diciembre de 2019, se recibió reporte por parte del Sistema de Emergencias 911, donde se reportó a una persona del sexo masculino que, al parecer, presentaba problemas respiratorios; razón por la cual, se dirigió personal a bordo de la unidad médica; no obstante, debido a que la **P1**, paramédico de dicha corporación ya estaba atendiendo a dicha persona, no fue necesaria la intervención de **P2**, reportando dicho personal a las **12:32 horas** que se trataba de un código negro; tratándose del deceso del señor **VD†**. Con dicha información, es posible establecer que ni **AR2**, persona que tenía asignada la vigilancia del agraviado, ni **AR1**, persona que ordenó su ingreso a separos preventivos, solicitó de manera inmediata la presencia de personal médico en el lugar; omisión que este Organismo estima igualmente violatoria del derecho a la integridad personal y a la vida, en relación con el deber del Estado garante de las personas privadas de su libertad.

130. Por otro lado, este Organismo no pasa por alto que, además de la nula vigilancia directa por parte de **AR2** sobre el agraviado, también se detectó que pese a que **PP3**, también se encontraba asignado al área de separos, éste manifestó que ese día tenía capacitación de armas en la parte trasera de las instalaciones; a lo cual, además, se suma el dicho de **PP4**, Comandante de la Segunda Guardia de la Corporación, quien indicó que, aunque generalmente se designan dos personas para vigilar el área de separos y éstas deben realizar revisiones a los detenidos cada media hora aproximadamente, todo depende de los trabajos que tengan que realizar. Dicha información, documentada por personal de esta Comisión en fecha 23 de diciembre de 2019, adquiere relevancia si se toma en consideración que, el motivo por el cual **AR2** omitió vigilar a **VD†**, lo fue el estar realizando labores de limpieza.

131. Ello, permite identificar que, a pesar de que se designa personal que *prima facie* pareciera ser suficiente para vigilar el área de separos, su actuación activa en la vigilancia de los detenidos, depende de que no les sean asignadas actividades diversas a las originalmente; como es el hecho de recibir capacitación, tal y como sucedió en el caso concreto con **PP3** o realizar labores de limpieza de las instalaciones, como en el caso de **AR2**. Motivo por el cual, la Presidencia Municipal de Fresnillo, Zacatecas, por conducto de la Dirección de Seguridad Pública de Fresnillo, Zacatecas, deberá implementar medidas tendentes a que esto no se vuelva a repetir, instruyendo específicamente a elementos policiacos en la función de custodia y vigilancia de las personas privadas de la libertad en los separos preventivos.

132. De la misma manera, esta Comisión no pasa por alto que, pese a que la Dirección de Seguridad Pública de Fresnillo, Zacatecas cuenta con circuito de videovigilancia, de la investigación se desprende que, al menos hasta en la fecha en que sucedieron los acontecimientos que motivan esta Recomendación, los monitores de vigilancia se encontraban en el privado del entonces Director de la Corporación; lo cual, fue informado a este Organismo por **SJ2** y **SJ1** a través del informe de autoridad que, de manera conjunta, rindieron con motivo de los hechos materia de la queja. Hecho que este Organismo estima totalmente irresponsable, pues es obvio que si el Director no se encontraba en las instalaciones de la Corporación, como en la especie ocurrió, en virtud de que el **SJ1** se dirigía a una posada, según lo informó al personal de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, era imposible que alguna persona realizara la vigilancia remota del agraviado, a través del sistema de vigilancia.

133. En lo atinente, esta Comisión también nota que, durante la investigación de los hechos, **SJ3**, en ese entonces Subdirector de Seguridad Pública de Fresnillo, Zacatecas informó en fecha 05 de marzo de 2020 que, luego de los lamentables hechos en que perdiera la vida **VD†**, se realizó la ampliación del circuito cerrado de vigilancia con que cuenta la Dirección de Seguridad Pública de Fresnillo, Zacatecas, ello, mediante la instalación de 16 cámaras de videograbación y un monitor de 55 pulgadas, mismo que se encuentra monitoreado y en funcionamiento las 24 hora del día, por personal capacitado para ello; así como, un módulo de control de dicho monitor, ubicado en la oficina de radio de la Dirección, lo cual, acreditó con una fotografía a color. Con dichas acciones correctivas, esta Comisión advierte la voluntad de la Administración Municipal para prevenir hechos como el que ahora nos ocupan; empero, no impiden que se tenga debidamente acreditada su responsabilidad institucional, al haber puesto atención a tales deficiencias, hasta que se perdió una vida humana. Además de que, como se hizo notar en las Recomendaciones **07/2021** y **19/2021**, esta Comisión Estatal ha detectado que, cuando se solicitan los videos de vigilancia por nuestra parte, quien ocupa el cargo de Director, emite diversa información relacionada con dicho tema, siempre, con el ánimo de evadir responsabilidades.

134. Lo anterior, también ocurre con la infraestructura de las puertas ubicadas en los separos de la Corporación, circunstancia que este Organismo destacó en el informe de actividades del año inmediato anterior al que ocurrieron los hechos que nos ocupan (2018), en donde se hizo énfasis en que cuando una persona es privada de su libertad por parte de una autoridad municipal, los lugares de detención, como es el caso de los separos preventivos municipales, deben contar con el **equipamiento necesario para garantizar a las personas privadas de su libertad una estancia digna y segura,** aun cuando su permanencia no exceda de treinta y seis horas, por lo tanto, **deben contar con óptimas condiciones de infraestructura**, equipo, servicios y personal. Motivo por el cual, las autoridades vinculadas a la seguridad pública deben respetar, proteger y garantizar el derecho a la vida, la integridad - física, psicológica y moral- y la dignidad de las personas privadas de su libertad por infracciones a los reglamentos gubernativos y de policía. En virtud a que la custodia y atención de las personas detenidas en separos preventivos deben cumplir con los estándares internacionales y respetar los derechos humanos inderogables de dichas personas. Lo anterior a efecto de garantizar que ninguna persona detenida, pierda la vida al interior de los separos preventivos, sea torturada o maltratada por los elementos policiacos, sea agredida por otros detenidos o por servidor público alguno.

135. Sin embargo, del informe de investigación ministerial que obra en autos de la carpeta de investigación originada con los mismos hechos que ahora se resuelven, se desprende que, el ahora occiso, utilizó como punto fijo una viga de acero ubicada en la entrada de la celda en la que estaba recluido, mientras que, como punto de apoyo, hizo uso de una banca de concreto ubicada dentro de la celda. Aunado a ello, en el acta de registro e inspección del lugar del hecho, se asentó que, en la puerta de acero de entrada a la celda, se encontró una sudadera negra, amarrada con un nudo; lo cual permite entonces concluir que existían puntos en los cuales no solo el agraviado, sino cualquier otra persona, podía atentar contra su vida.

136. Motivo por el cual, sin soslayar que, el propio **SJ3**, en ese entonces Subdirector de Seguridad Pública de Fresnillo, Zacatecas, informara sobre la instalación de soleras de acero

en la parte interior de cada celda del área de separos, con las cuales se recubrieron las pequeñas ranuras y espacios de puente o base fija que fueron utilizadas por **VD†** para colocar al prenda de vestir que utilizó para ahorcarse, esta Comisión lamenta y reprueba de manera contundente que dicha medida correctiva se haya implementado hasta que éste perdió la vida; cuando lo que debió haber sucedido es que, desde que se construyeron las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública, debieron preverse tales escenarios de riesgo. Y si bien es cierto, dichas omisiones no se atribuyen a la administración Municipal a la que se dirige esta Recomendación, se señalan porque persistieron hasta la fecha en que el agraviado perdió la vida, sin que se haya actuado para prevenir acontecimientos como ese.

137. Por otra parte, este Organismo tampoco puede pasar por alto que, del análisis del video al que se dio acceso el día de los hechos se advirtió que, luego de que **AR2** encontrara al agraviado, de manera inmediata entraron a la escena del hecho **PA1, PA2, PA3, AR1, PP3**, todos, personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, según informó en el momento el **SJ1.** Así las cosas, en comparecencia rendida ante esta Comisión, en el caso de la primera, ésta manifestó, sin especificar quién, que se le notificó sobre la muerte del agraviado y, enseguida acudió hasta la celda, para luego avocarse a informar a sus superiores; por su parte, **PA3** manifestó ser Cajera Fiscal y explicó que al escuchar gritos de sus compañeros, diciendo que una persona estaba suspendida en separos, se trasladó hasta dicho lugar para ver si podría ayudar en algo; no obstante, al arribar al área se enteró de que dicha persona ya no tenía signos vitales, así como de que ya se había llamado a una ambulancia. Finalmente, tanto **AR1,** como el elemento **PP3**, coincidieron en que se hicieron presentes tras el pedido de ayuda de **AR2.**

138. Lo anterior, se estima contrario al contenido en los Protocolo Nacional de Actuación Primer Respondiente y de Policía con Capacidades para Procesar el Lugar de la Intervención; así como en la Guía Nacional de Cadena de Custodia que prevén de manera general que todos los servidores públicos que intervienen en el procesamiento del lugar de los hechos o del hallazgo, así como en la cadena de custodia **deben proteger y preservar los datos y elementos de prueba (medios, indicios o evidencia)** para garantizar su autenticidad en el juicio y la veracidad de lo que se hace constar y, por ende, el debido proceso. En ese sentido la intervención en el lugar de los hechos o del hallazgo, en el procesamiento de los datos o elementos de prueba, y en la aplicación de cadena de custodia, entre otros, precisa una preparación sólida e idónea, una capacitación constante, con el conocimiento de las formalidades técnicas y métodos que exige la normatividad aplicable para la actividad que realizan. Ello permite proteger y reunir de forma eficaz las pruebas en el lugar de los hechos y reduce el mínimo la contaminación o pérdida de material pertinente.

139. Por su parte, el Código Nacional de Procedimientos Penales, en los artículos 131, 132, 227, dispone que el Ministerio Público tiene la obligación de iniciar la investigación y, ordenar la recolección de indicios y medios de prueba que deberán servir para sus respectivas resoluciones y las del Órgano Jurisdiccional, así como recabar los elementos necesarios que determinen el daño causado por el delito y la cuantificación del mismo para los efectos de la reparación. De manera específica, los Policías deben:

- Preservar el lugar de los hechos o del hallazgo y en general, realizar todos los actos necesarios para garantizar la integridad de los indicios. Y, en caso de ser necesario, dar aviso a los Policías con capacidad para procesar la escena del hecho y al Ministerio Público;
- Recolectar y resguardar objetos relacionados con la investigación de los delitos;
- Entrevistar a las personas que pudieren aportar algún dato o elemento para la investigación; así como proporcionar atención a víctimas u ofendidos o testigos del delito. Para garantizar lo anterior, se ha implementado la cadena de custodia, que es el sistema de control y registro que se aplica al indicio, evidencia, objeto, instrumento o producto del hecho delictivo, desde su localización, descubrimiento o aportación, en el lugar de los hechos o del hallazgo, hasta que la autoridad competente ordene su conclusión, con el fin de corroborar los elementos materiales probatorios y la evidencia física, la cadena de custodia se aplicará teniendo en cuenta los siguientes factores: identidad, estado original, condiciones de recolección, preservación, empaque y traslado, lugares y fechas de permanencia y

> los cambios que en cada custodia se hayan realizado; igualmente se registrará el nombre y la identificación de todas las personas que hayan estado en contacto con esos elementos.

140. En ese sentido, la tesis de rubro **“CADENA DE CUSTODIA. DEBE RESPETARSE PARA QUE LOS INDICIOS RECABADOS EN LA ESCENA DEL CRIMEN, GENEREN CONVICCIÓN EN EL JUZGADOR”**, señala que la recolección de indicios, en una escena del crimen se realiza con la intención de que éstos generen el mayor grado de convicción en el juzgador, para lo cual, es necesario respetar la llamada “cadena de custodia”, que consiste en el registro de los movimientos de la evidencia, es decir, es el historial de “vida” de un elemento de evidencia, desde que se descubre hasta que ya no se necesita. Por ello, la cadena de custodia es el conjunto de medidas que deben tomarse para preservar integralmente las evidencias encontradas en una escena del crimen, convirtiéndose en requisitos esenciales para su posterior validez. Su finalidad es garantizar que todos los indicios recabados sean efectivamente los que se reciben posteriormente en los laboratorios para su análisis, debiendo conocer para tal efecto, el itinerario de cómo llegaron hasta tal fase, así como el nombre de las personas que se encargaron de su manejo, pues, de lo contrario, no podrían tener algún alcance probatorio, pues carecerían del elemento fundamental en este tipo de investigaciones consistente en la fiabilidad.

141. Respecto de los responsables de cadena de custodia, el artículo 228 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece que la aplicación de la cadena de custodia es responsabilidad de quienes, en cumplimiento de las funciones propias de su encargo o actividad, tengan contacto con los indicios, vestigios, evidencias, objetos, instrumentos o productos del hecho delictivo. Por su parte, el “Acuerdo número A/002/2010 mediante el cual se establecen los lineamientos que deberán observar todos los servidores públicos para la debida preservación y procesamiento de los hechos o del hallazgo y de los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como de los instrumentos, objetos o productos del delito”, señala:

> - En su artículo TERCERO que las acciones que se realicen para la Preservación del lugar de los indicios o Evidencias, hasta que finalice la Cadena de Custodia, por orden del Ministerio o del Juez, se asentarán en RCC.
> - En el punto CUARTO, se señala que para evitar el rompimiento de CADENA DE CUSTODIA, los servidores públicos que intervengan en las distintas fases del procesamiento de los INDICIOS O EVIDENCIAS desde su búsqueda, traslado a los servicios periciales para la realización de las pruebas correspondientes, así como para su almacenamiento, o transferencia al SAE, según el caso, o que por cualquier circunstancia entren en contacto con los INDICIOS O EVIDENCIAS, deberán asentar en el RCC la información correspondiente a su intervención, así como su nombre completo y otros datos que se requieran, su firma autógrafa, así como la razón de la entrega de unos a otros.

142. Bajo esa lógica, la obligación de **AR2**, elemento de la Dirección de Seguridad Pública de Fresnillo, Zacatecas, una vez que se verificó que el agraviado no contaba con signos vitales y que dicha información fue corroborada por **P1**, era preservar la escena del hecho y no permitir que, con su presencia, el personal que ha sido señalado en párrafos antecedentes, la contaminara; sin embargo, dicha omisión, denota la nula capacitación del elemento y de todo el personal interviniente, en el Protocolos de Actuación Policial previamente señalados (Protocolo Nacional de Actuación Primer Respondiente y de Policía con Capacidades para Procesar el Lugar de la Intervención; así como en la Guía Nacional de Cadena de Custodia) lo cual, indudablemente incide en la investigación del Ministerio Público. Por lo que la Presidencia Municipal de Fresnillo, Zacatecas, por conducto de la Dirección de Seguridad Pública, deberá implementar campañas de capacitación constante para todo su personal, con el objetivo de evitar que situaciones como esta, vuelvan a ocurrir, en aras de salvaguardar también el derecho a la justicia, en relación con el debido proceso de los gobernados.

VII. DE LAS VÍCTIMAS INDIRECTAS.

1. El artículo 4°, párrafo segundo, de la Ley de Víctimas del Estado de Zacatecas, establece que, cuando como consecuencia de la comisión de un delito o de violaciones a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, se reconozca una víctima directa, se considerará así a los familiares o aquellas personas físicas a cargo de la víctima directa, que tengan una relación inmediata con ella; en ese entendido, considera como tal, al cónyuge, la concubina o el concubinario, las hijas e hijos de la víctima, los padres y los dependientes económicos de la víctima.

2. En el presente caso, esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas logró acreditar que **VD†** era hijo de **VI1** y de **VI2**, personas que manifestaron a este Organismo que su hijo les apoyaba económicamente; además de que dieron cuenta de las afectaciones emocionales originadas con su deceso, las cuales orillaron a la primera a recibir atención psicológica. Asimismo, ambos progenitores informaron sobre el hecho de haberse visto en la necesidad de adquirir una deuda, con el objetivo de poder cubrir los gastos funerarios de su hijo; sin que del sumario se advierta que la Autoridad Municipal a la que se dirige esta Recomendación, les haya brindado algún tipo de apoyo económico.

3. De la misma manera, este Organismo acreditó el vínculo entre **VD†** y **VI3** y **M1**, concubina e hija.

VIII. CONCLUSIONES DEL CASO.

1. Esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, reprueba la vulneración del derecho a la integridad personal y a la vida, en relación con el deber del Estado garante, respecto de la muerte de **VD†** lo cual, es atribuible a la omisión del personal de la Dirección de Seguridad Pública de Fresnillo, Zacatecas que, durante la guardia comprendida de las **8:00 y las 20:00 horas del día 23 de diciembre de 2019**, bajo la dirección del **SJ1**, entonces Director de Seguridad Pública Municipal, ya que dicho personal omitió vigilar y custodiar de manera adecuada los separos de la Corporación, en agravio directo del ahora occiso, lo que derivó en la lamentable pérdida de su vida.

2. Y de manera indirecta, al **SJ1**, quien al momento de los hechos ostentaba el cargo de Director de dicha Corporación, en virtud de las omisiones detectadas en la instalación y funcionamiento de las cámaras de vigilancia de la Corporación, primordialmente en lo que atañe al hecho de que dichas cámaras se encontraran ubicadas en su privado, lo que ocasionó un nulo monitoreo y vigilancia de la mismas por parte de personal designado para ello; así como en la infraestructura física de las celdas. Deficiencias que, si bien se corrigieron y como ya se dijo, no se atribuyen de origen a la Administración 2018-2021, se señalan porque de haberse atendido y resuelto con anterioridad al hecho que motiva esta Recomendación, posiblemente se habría evitado la muerte de **VD†.**

3. De ahí que, para este Organismo, resultó indefectible establecer, la responsabilidad por omisión, atribuible al personal de la Dirección de Seguridad Pública de Fresnillo, Zacatecas que se encontraba de turno, en el horario y día en que se suscitaron los hechos; primordialmente en el caso de **AR2**, elemento que se encontraba a cargo del área de separos; así como **AR1**, en ese momento Juez Calificador en Turno, por haber omitido la instauración del procedimiento previsto en la Ley de Justicia Comunitaria, así como ordenar la certificación médica inmediata del señor **VD†**.

IX. REPARACIONES.

1. De conformidad con lo establecido en los artículos 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 51 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, al acreditarse violación a los derechos humanos de **VD†**, atribuible a servidores públicos de la Dirección de Seguridad Pública de

Fresnillo, Zacatecas, la Recomendación formulada al respecto, debe incluir las medidas que procedan para lograr la efectiva restitución de las personas afectadas en sus derechos.

2. Dicha reparación, de conformidad con los Principios y Directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones", adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 2005, las violaciones de derechos humanos deben contemplar, de forma apropiada y proporcional a la gravedad de ésta, una reparación plena y efectiva en las formas siguientes:, restitución, rehabilitación, satisfacción, indemnización, deber de investigar y garantías de no repetición. En el caso en concreto y ante la pérdida fatal, no es posible solicitar la restitución de los derechos humanos conculcados. Las reparaciones se contemplan también en la Ley General de Víctimas, en sus artículos 1, último párrafo, 7, fracción I y II, y particularmente en el texto legal del artículo 26, que establece que "Las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera oportuna, plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva por el daño que han sufrido como consecuencia del delito o hecho victimizante que las ha afectado o de las violaciones de derechos humanos que han sufrido, comprendiendo medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y medidas de no repetición", además por lo previsto en el artículo 27 del mismo ordenamiento legal.

3. La Corte ha señalado que los familiares de las víctimas de violaciones de derechos humanos pueden ser, a su vez, víctimas. Ha considerado violado el derecho a la integridad psíquica y moral de los familiares de las víctimas por el sufrimiento causado por las violaciones perpetradas contra sus seres queridos y las posteriores actuaciones u omisiones de las autoridades estatales, por ello, es de vital importancia que las víctimas reciban la valoración médica y psicológica necesaria para determinar los daños que sufrieron como consecuencia de la vulneración a sus derechos, a través de la vulneración de los derechos de su ser querido, en este caso, a favor de **VI1** y de **VI2**, en su calidad de padres; así como de **VI3** y **M1**, en su calidad de concubina e hija, según lo acreditó esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas.

A) De la indemnización.

1. La indemnización ha de concederse, de forma apropiada y proporcional a la gravedad de la violación y a las circunstancias de cada caso, por todos los perjuicios económicamente evaluables que sean consecuencia de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos o de violaciones graves del derecho internacional humanitario, tales como los siguientes:

a) El daño físico o mental;
b) La pérdida de oportunidades, en particular las de empleo, educación y prestaciones sociales;
c) Los daños materiales y la pérdida de ingresos, incluido el lucro cesante;
d) Los perjuicios morales;
e) Los gastos de asistencia jurídica o de expertos, medicamentos y servicios médicos y servicios psicológicos y sociales.[88]

2. En el presente punto, debido al fallecimiento de **VD†**, la indemnización se realizaría a favor de las víctimas indirectas, que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 4 fracción I y II, de la Ley de Atención a Víctimas del Estado de Zacatecas, correspondería a **VI1** y a **VI2**, en su calidad de padres; así como de **VI3** y **M1**, en su calidad de concubina e hija; para que, en su caso, sean beneficiarios del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, para que sea cuantificado lo previsto en los incisos d) y e), relativos a los perjuicios morales, los gastos de asistencia jurídica y servicios psicológicos requeridos para la aceptación de la pérdida.

B) De la rehabilitación.

[88] Ídem, párr. 20.

1. La presente reparación debe “incluir la atención médica y psicológica, así como servicios jurídicos y sociales.”[89], en ese contexto, las medidas de rehabilitación buscan reducir los padecimientos físicos y psicológicos de las víctimas, a través del otorgamiento de servicios de atención médica, psicológica, jurídica y social que éstas requieran.

2. Por lo tanto, si bien, el señor **VD†** como víctima por omisión del personal de la Dirección de Seguridad Pública de Fresnillo, Zacatecas, no puede recibir atención, deberá brindarse la atención psicológica y tanatológica a sus familiares, por la afectación emocional que pudiera haber causado su deceso.

C) De las medidas de satisfacción.

1. La satisfacción cuando sea pertinente y procedente deberá incluir la totalidad o parte de las medidas siguientes:

a) Medidas eficaces para conseguir que no continúen las violaciones;
b) La verificación de los hechos y la revelación pública y completa de la verdad, en la medida en que esa revelación no provoque más daños o amenace la seguridad y los intereses de la víctima, de sus familiares, de los testigos o de personas que han intervenido para ayudar a la víctima o impedir que se produzcan nuevas violaciones;
c) La búsqueda de las personas desaparecidas, de las identidades de los niños secuestrados y de los cadáveres de las personas asesinadas, y la ayuda para recuperarlos, identificarlos y volver a inhumarlos según el deseo explícito o presunto de la víctima o las prácticas culturales de su familia y comunidad;
d) Una declaración oficial o decisión judicial que restablezca la dignidad, la reputación y los derechos de la víctima y de las personas estrechamente vinculadas a ella;
e) Una disculpa pública que incluya el reconocimiento de los hechos y la aceptación de responsabilidades;
f) **La aplicación de sanciones judiciales o administrativas a los responsables de las violaciones**;
g) Conmemoraciones y homenajes a las víctimas;
h) **La inclusión de una exposición precisa de las violaciones ocurridas en la enseñanza de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, así como en el material didáctico a todos los niveles**.[90]

2. En relación a la presente reparación, resultan pertinentes y procedentes, las señaladas en los incisos a), f) y h), esto es, que como medidas eficaces para conseguir que no continúen este tipo de violaciones por omisión, deberá capacitarse al personal de la Dirección de Seguridad Pública de Fresnillo, Zacatecas, para que se sujete a los protocolos que permitan realizar vigilancia a las personas privadas de la libertad en separos preventivos, en la medida de detectar y evitar que pierdan la vida, como el acontecido con **VD†.**

3. Asimismo, se inicien los procedimientos administrativos por parte del Órgano Interno de Control o Contraloría Interna del Municipio de Fresnillo, Zacatecas, en contra de **AR1** y **AR2** y de todos los servidores públicos que incurrieron en dicha omisión, por las violaciones al derecho a la integridad y a la vida de las personas privadas de su libertad, así como del derecho a la protección de la salud, en conexidad con el derecho a la integridad física, tomando en consideración los términos y plazos que, para la prescripción, prevé el artículo 74 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas[91].

---

[89] Ídem, párr. 21.
[90] Ídem, párr. 22.
[91] Ley General de Responsabilidades Administrativas. Artículo 74. Para el caso de Faltas administrativas no graves, las facultades de las Secretarías o de los Órganos internos de control para imponer las sanciones prescribirán en tres años, contados a partir del día siguiente al que se hubieren cometido las infracciones, o a partir del momento en que hubieren cesado. Cuando se trate de Faltas administrativas graves o Faltas de particulares, el plazo de prescripción será de siete años, contados en los mismos términos del párrafo anterior. La prescripción se interrumpirá con la clasificación a que se refiere el primer párrafo del artículo 100 de esta Ley. Si se dejare de actuar en los procedimientos de responsabilidad administrativa originados con motivo de la admisión del citado informe, y como consecuencia de ello se produjera la caducidad de la instancia, la prescripción se reanudará desde el día en que se admitió el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa. En ningún

D) De las garantías de no repetición.

1. A fin de prevenir la violación de los derechos mencionados en párrafos precedentes, resulta indispensable que la Presidencia Municipal de Fresnillo y la Dirección de Seguridad Pública Municipal, realicen los trámites correspondientes ante las instancias respectivas, a efecto de obtener y contar con los recursos mínimos indispensables, suficientes y eficaces, para el debido funcionamiento de las instalaciones de la Corporación, como son: personal técnico, administrativo, jurídico, médico y operativo suficiente para cubrir todos los servicios y horarios; y con ello, cumplir con su obligación de Estado garante de la integridad física y la vida de las personas detenidas que están bajo su custodia.

2. Igualmente, es indispensable la educación en materia de respeto, protección y garantía de los derechos humanos por parte de los servidores públicos involucrados, específicamente del derecho a la integridad personal y a la vida, en relación con el deber del Estado garante de las personas privadas de su libertad, así como del derecho a la protección de la salud, en conexidad con el derecho a la integridad; por lo que, para ello es obligación de dichos funcionarios, la observación de los Protocolos Nacional de Actuación Primer Respondiente y de Policía con Capacidades para Procesar el Lugar de la Intervención; así como en la Guía Nacional de Cadena de Custodia y de la Ley de Justicia Comunitaria del Estado de Zacatecas.

3. Por lo anterior, deberán implementarse programas de capacitación dirigidos al personal de la citada Dirección en materia de derechos humanos, que les permitan identificar las acciones u omisiones que vulneran los citados derechos en perjuicio de las personas detenidas, a fin de incidir en la erradicación de éstas.

X. RECOMENDACIONES.

Por todo lo anteriormente expuesto, y con fundamento en los 1 y 102 apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 2, 3, 4, 8, 17, 37, 51, 53, 54, 56, 57 y 58 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas se emiten las siguientes Recomendaciones:

PRIMERA. Dentro del plazo máximo de un mes, contado a partir de la notificación de la presente Recomendación, se inscriba en el Registro Estatal de Víctimas a **VD†**, como víctima directa de violaciones a sus derechos humanos, por parte de las autoridades de la Dirección de Seguridad Pública de Fresnillo, Zacatecas; así como a **VI1** y **VI2**, en su calidad de padres; así como de **VI3** y **M1**, en su calidad de concubina e hija, por ser víctimas indirectas[92]. Lo anterior, a efecto de que, en un plazo máximo de seis meses, contado a partir de la notificación de la presente Recomendación, se garantice su acceso oportuno al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, previsto en la Ley de Atención a Víctimas del Estado de Zacatecas, para que se realice la indemnización correspondiente, conforme a los parámetros establecidos en el apartado anterior. Debiendo remitir a este Organismo las constancias con que acrediten su cumplimiento.

SEGUNDA. Dentro del plazo máximo de un mes, contado a partir de la aceptación de esta resolución se localice a **VI1** y a **VI2**, así como a **VI3** y **M1**, a fin de que manifiesten si es su deseo recibir atención psicológica y tanatológica, relacionada con los hechos de la presente queja. De ser el caso, en un plazo de un mes, posterior a ello, se inicie su tratamiento hasta su total restablecimiento, remitiendo a este Organismo, las constancias que acrediten su cumplimiento.

---

caso, en los procedimientos de responsabilidad administrativa podrá dejar de actuarse por más de seis meses sin causa justificada; en caso de actualizarse dicha inactividad, se decretará, a solicitud del presunto infractor, la caducidad de la instancia. Los plazos a los que se refiere el presente artículo se computarán en días naturales.

[92] Fracciones I y II, del artículo 4 de la Ley de Atención a Víctimas del Estado de Zacatecas.

TERCERA. Dentro del plazo máximo de tres meses, contados a partir de la aceptación de la presente Recomendación, se cubran los gastos funerarios con motivo de la muerte del señor **VD†**, a sus padres, **VI1** y **VI2**, debiendo remitir a este Organismo, las constancias de cumplimiento.

CUARTA. Dentro del plazo máximo de tres meses, contados a partir de la aceptación de la presente Recomendación, se garantice una adecuada supervisión, vigilancia y custodia de las personas internas en los separos de la Dirección de Seguridad Pública, a través de rondines constantes y el adecuado funcionamiento y monitoreo de las cámaras de vigilancia, que permita a los elementos cumplir con la obligación del Estado garante del derecho a la integridad personal y a la vida de las personas detenidas; debiendo enviarse a este Organismo, las constancias de cumplimiento.

QUINTA. Dentro del plazo máximo de tres meses, contados a partir de la aceptación de la presente Recomendación, se actualice el sistema de videovigilancia ubicado en las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública de Fresnillo, Zacatecas, previendo la colocación de cámaras en todas las áreas de dichas instalaciones, garantizando que se realice su adecuado monitoreo, de manera constante, a efecto de realizar la efectiva custodia de las personas detenidas, respetando desde luego, en todo momento, su derecho a la privacidad. Asimismo, se deberá garantizar que las grabaciones de dichas cámaras guarden las filmaciones por el lapso de dos años[93], debiendo para ello, designar personal capacitado para la correcta operación y monitoreo de dicho sistema; así como para la extracción que, en su caso, sea necesaria con motivo de investigaciones realizadas por este Organismo o por la Representación Social. Debiendo remitir a este Organismo, las constancias de cumplimiento respectivas.

SEXTA. Dentro del plazo máximo de un mes, contado a partir de la aceptación de la presente resolución, se inicie procedimiento administrativo de responsabilidad, en contra de **AR2**, elemento de la Dirección de Seguridad Pública de Fresnillo, Zacatecas que, en fecha 23 de diciembre de 2019, omitió cumplir con la protección y garantía del derecho a la integridad personal y a la vida del agraviado, así como de **AR1**, en ese tiempo Juez Calificador adscrito a dicha Dependencia, y demás servidores públicos encargados de salvaguardar la integridad y la vida del ahora occiso, atendiendo a las disposiciones del numeral 74 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, previamente señalada; debiendo enviarse a este Organismo, las constancias de cumplimiento.

SÉPTIMA. Dentro del plazo máximo de tres meses, contados a partir de la aceptación de la presente resolución, se acredite la capacitación de los elementos de la Dirección de Seguridad Pública de Fresnillo, Zacatecas, así como de todo el personal jurídico y administrativo, incluyendo a Jueces Calificadores y médicos adscritos a la misma; a fin de que realicen sus labores, bajo los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y pleno respeto a los derechos fundamentales y a la dignidad humana. Haciendo énfasis en temas relacionados al derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica, al derecho a la integridad y seguridad personal y a la vida, en relación con el deber del Estado garante de las personas privadas de su libertad, así como de derecho a la protección de la salud en conexidad con el derecho a la integridad física, con la finalidad de mejorar las técnicas, aptitudes y métodos de trabajo policial, para la aplicación de la ley en forma correcta y eficaz; así como en todo lo relacionado a los Protocolos Nacional de Actuación Primer Respondiente y de Policía con Capacidades para Procesar el Lugar de la Intervención; así como en la Guía Nacional de Cadena de Custodia, así como a la Ley de

[93] Lo anterior, acorde a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, que dispone: art. 159. Todo establecimiento, instalación o cualquier sitio en control de las autoridades federales, estatales o municipales en donde pudieran encontrarse personas en privación de la libertad, deberá contar con cámaras de video que permitan registrar los accesos y salidas del lugar. Las grabaciones deberán almacenarse de forma segura por dos años.

Justicia Comunitaria del Estado de Zacatecas, remitiendo a este Organismo, las constancias de cumplimiento respectivas.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 53, párrafo segundo de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, se hace del conocimiento de la autoridad a la que va dirigida esta Recomendación, que dispone de un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente en que ésta se le notifique, para que manifieste si la acepta o no, en el entendido de que, de no aceptarla, su respuesta se hará del conocimiento de la opinión pública. En caso de que la acepte, se le notifica que dispone de un plazo de 15 días, contados a partir del vencimiento del término del que disponía para responder sobre la aceptación, a fin de enviar las pruebas de su cumplimiento.

Así lo determina y firma

_____

DRA. EN D. MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOS
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE ZACATECAS

Expediente: CDHEZ/019/2019.

Persona quejosa: VD.

Persona agraviada: VD.

Autoridad responsable: Licenciado **AR**, Diputado de la Sexagésima Tercera Legislatura del Estado de Zacatecas.

Derecho humano vulnerado: Derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

Zacatecas, Zacatecas, a 12 de agosto de 2021, una vez concluida la investigación de los hechos que motivaron el expediente CDHEZ/019/2019, y analizado el proyecto presentado por la Sexta Visitaduría de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, la suscrita aprobó, de conformidad con los artículos 4, 8 fracción VIII, 17 fracción V, 37, 51, 53 y 56 de la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, en relación con lo dispuesto por los numerales 161 fracción X, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 y 175 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, la **Recomendación 42/2021,** que se dirige a la autoridad siguiente:

H. LXIII LEGISLATURA DEL ESTADO DE ZACATECAS, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 39 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, por lo que hace a los hechos cometidos por el **LICENCIADO AR**, Diputado de la Sexagésima Tercera Legislatura del Estado de Zacatecas.

I. DE LA CONFIDENCIALIDAD.

1. De conformidad con los artículos 6º, apartado A, fracción II, y 16, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 23 y 85 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, los datos personales de la peticionaria y agraviada, relacionados con esta recomendación, permanecerán confidenciales, ya que éstos no son públicos.

II. RELATORÍA DE LOS HECHOS Y OBJETO DE LA CONTROVERSIA.

1. El 17 de enero de 2019, **VD** presentó, de conformidad con el artículo 30 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, queja en contra del Licenciado **AR**, Diputado de la Sexagésima Tercera Legislatura del Estado de Zacatecas, por actos presuntamente violatorios de sus derechos humanos.

Por razón de turno, el 18 de enero de 2019, se remitió la queja a la Sexta Visitaduría General, bajo el número de expediente citado al rubro, a efecto de formular el acuerdo de calificación de ésta, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 59 fracción I y 123 del Reglamento de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas.

El 23 de enero de 2019, los hechos se calificaron como una presunta violación al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, de conformidad con lo establecido por el artículo 124, fracción III, del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas.

2. Los hechos materia de la queja consistieron en lo siguiente:

VD refirió que, el […], en tribuna, el Diputado **AR,** realizó manifestaciones que la involucraban a ella, en su entonces calidad de […]; además de haber sido grabada al momento en el que el diputado la exhibió públicamente.

3. Licenciado **AR**, Diputado de la Sexagésima Tercera Legislatura del estado de Zacatecas, rindió el informe correspondiente el 05 de febrero de 2019.

III. COMPETENCIA.

1. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas es competente, en términos de los artículos 1º, 4º, 6º, 8º fracción VII, inciso A) y 31 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, en relación con los numerales 15, 22 y 23 de su Reglamento Interno.

2. De conformidad con los artículos 123 y 124 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, este Organismo advirtió que de los hechos se puede presumir la violación a los derechos humanos de **VD** y la responsabilidad por parte del servidor público señalado.

3. Esta Comisión advirtió la probable violación del siguiente derecho:

I. Derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

IV. PROCEDIMIENTO ANTE LA COMISIÓN.

Con la finalidad de documentar las presuntas violaciones a derechos humanos, así como para determinar la existencia o no de responsabilidad por parte del servidor público señalado, este Organismo realizó las siguientes actuaciones:

1. Entrevistas a las personas relacionadas con los hechos:
   - El 17 de enero de 2019, **VD,** presentó escrito de queja y en esa misma fecha lo ratificó.
   - El 15 de febrero de 2019, compareció **VD,** peticionaria y agraviada.

2. Solicitud de informes:
   - El 24 de enero de 2019, se solicitó informe al Licenciado **AR**, Diputado de la Sexagésima Tercera Legislatura del Estado de Zacatecas.

3. Recopilación de información:
   - El 05 de febrero de 2019, se presentó el informe de autoridad, suscrito por el Licenciado **AR**, Diputado de la Sexagésima Tercera Legislatura del Estado de Zacatecas.
   - El 19 de febrero de 2019, se presentó escrito firmado por la quejosa **VD.**
   - El 06 de mayo de 2019, se presentó escrito firmado por la Doctorante **SP1,** Presidenta de la Mesa Directiva de la Sexagésima Tercera Legislatura del Estado de Zacatecas.
   - El 29 de mayo de 2019, se presentó escrito firmado por la quejosa **VD.**
   - El 13 de octubre de 2020, se presentó escrito firmado por la quejosa **VD.**
   - El 13 de octubre de 2020, personal adscrito a este Organismo recabó acta circunstanciada, respecto de la presencia de **VD**, en las instalaciones de este Organismo.
   - El 13 de octubre de 2020, el Maestro en Ciencias Forenses **PP,** recabó acta circunstanciada, respecto a la negativa de la quejosa de permitir que se le practicará un dictamen pericial psicológico.

4. Consulta de documentos:
   - El 25 de enero de 2019, se llevó a cabo la inspección, en el portal del Poder Legislativo […], del video correspondiente a la sesión de la […] de la Honorable

Sexagésima Tercera Legislatura del Estado, celebrada el […], dentro del […], correspondiente al Primer Año de su Ejercicio Constitucional.

- El 25 de enero de 2019, se consultó, en el portal del Poder Legislativo […], del acta de la sesión de la […] de la Honorable Sexagésima Tercera Legislatura del Estado, celebrada el día […], dentro del […], correspondiente al Primer Año de su Ejercicio Constitucional.

V. PRUEBAS.

Con base en lo estipulado en los artículos 48 y 49 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, en relación con los numerales 150, 151, 152, 153 y 154 del Reglamento Interior de este Organismo, durante el procedimiento realizado por esta Institución se recabaron los elementos probatorios documentales, que a continuación se detallan:

VI. CONSIDERACIONES PREVIAS

1. El 13 de octubre de 2020, la quejosa **VD** presentó un escrito, mediante el cual se desistió de la queja presentada en contra del Licenciado **AR**, Diputado de la Sexagésima Tercera Legislatura del Estado.

2. El artículo 1°, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala de manera contundente la obligación de todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, de "promover, respetar, proteger y garantizar" los derechos humanos, de conformidad con los principios de "universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad", y se establece la obligación del Estado de "prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos". Esto conlleva que, todos los órganos del Estado, en el marco de las atribuciones que le son conferidas por la ley, están obligados a implementar programas tendentes a prevenir violaciones a los derechos humanos y garantizar que sean efectivamente respetados, y en caso de presentarse violaciones a derechos humanos, investigar, sancionar y reparar tales vulneraciones.

3. Es necesario precisar que, el legislador zacatecano, estableció en el artículo 51, de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas que, una vez concluida la investigación, se podrá formular un proyecto de recomendación, o acuerdo de no responsabilidad, o los previstos en el Reglamento, en los cuales se incluirá el análisis de los hechos, los argumentos y pruebas, así como los elementos de convicción y las diligencias practicadas. Por su parte, en el Reglamento Interno de este Organismo, se estableció, a favor de las y los quejosos, la figura de desistimiento[1], como causa para concluir el expediente de queja.

4. Sin embargo, en el caso concreto, este Organismo debe pronunciarse respecto de los hechos que dieron origen al expediente de queja, pues la violencia contra las mujeres: "[e]s un comportamiento aprendido que tiene sus raíces en la cultura y en la forma como ésta se estructura socialmente"; la cual se origina "[e]n la existencia de desequilibrios de poder en determinados contextos, formas de control interpersonales, posiciones de desventaja social frente a los hombres, y por pautas de construcción y orientación de la identidad"[2]. En razón a lo anterior, se debe tener en cuenta el deber social que se tiene de rechazar la violencia contra las mujeres.

---

[1] Como se aprecia en el artículo 161, fracción VI

[2] INMUJERES, "Guía metodológica para la sensibilización en género: Una herramienta didáctica para la capacitación en la administración pública. Violencia contra las mujeres: un obstáculo crítico para la igualdad de género", volumen 4, noviembre 2008, pág. 14.

5. Por otra parte, la violencia contra las mujeres en el país es una problemática grave, lo que ha llevado a que, en 20 entidades federativas[3], se haya activado la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, cuyo objetivo es garantizar la seguridad de mujeres y niñas, el cese de la violencia en su contra, y/o eliminar las desigualdades producidas por una legislación o política pública que agravia sus derechos humanos[4]. Lo anterior, atendiendo a la obligación de investigarlos actos de violencia cometidos en contra de las mujeres, en cumplimiento al deber estatal de investigar estos hechos, una vez que el Estado tiene conocimiento de los mismos, en un acto de rechazo a este tipo de conductas, y al deber de protección que el Estado debe brindar a las víctimas. Ya que, la violencia contra las mujeres, se traduce en una vulneración directa del derecho de éstas a una vida libre de violencia, y a su dignidad humana.

6. En México, el artículo 1° de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, encabeza el marco jurídico de protección de este derecho, estableciendo como objetivo principal el de garantizar el acceso de las mujeres "[…] a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no discriminación"; por su parte, el artículo 5 fracción IV, define a la violencia contra las mujeres como: "[c]ualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público".

7. En consonancia con lo anterior, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada en las Naciones Unidas en septiembre de 2015 y con la que México está comprometida, señala en su párrafo 20 que "[s]e eliminarán todas las formas de discriminación y violencia contra las mujeres y las niñas [...]", además incluye dentro de sus objetivos la meta 5.2 "Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado".

8. Atendiendo a lo anterior, surge la obligación de prevenir, proteger e investigar la violencia contra las mujeres. Por tanto, teniendo en consideración que la violencia contra las mujeres "no es un asunto privado, sino una violación a los derechos humanos, que genera responsabilidad estatal"[5], la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha sostenido que "[l]a jurisprudencia internacional [establece] el deber del Estado de actuar con la debida diligencia para proteger los derechos humanos y los derechos de las mujeres", señalando a su vez que "[e]sta obligación implica cuatro componentes: prevención, investigación, sanción y reparación de las violaciones a los derechos humanos"[6].

9. Por su parte, la Convención de Belém do Pará establece en su artículo 7 el deber estatal de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, lo que se traduce en las obligaciones específicas que los Estados deben adoptar a fin de dar cumplimiento a los deberes generales de respeto y garantía, y que conllevan un amplio abanico de acciones que van -por ejemplo- desde actuar con debida diligencia en el caso de mujeres desaparecidas, hasta la creación de un marco jurídico adecuado para la prevención y eliminación de la violencia contra las mujeres.

10. En el mismo sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que "[…] los Estados deben adoptar medidas integrales para cumplir con la debida diligencia en casos de violencia contra las mujeres, [precisando que] deben contar con un adecuado marco jurídico de protección, con una aplicación efectiva del mismo y con políticas de prevención y prácticas que permitan actuar de una manera eficaz ante las denuncias"[7].

---

[3] Estado de México, Morelos, Michoacán, Chiapas, Nuevo León, Veracruz (por violencia feminicida), Sinaloa, Colima, San Luis Potosí, Guerrero, Quintana Roo, Nayarit, Veracruz (por agravio comparado), Zacatecas*, Oaxaca, Durango, Campeche, Jalisco, * Puebla y Estado de México (por desaparición de niñas, adolescentes y mujeres).

[4] Artículo 23 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

[5] Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, "Violencia contra las mujeres, Serie de información sobre salud y derechos sexuales y reproductivos". Disponible: https://bit.ly/2JCtl1I

[6] CIDH, "El Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y Discriminación en Haití", 2009, OEA/Ser.L/V/II, párr. 80. Disponible en: https://bit.ly/2GetuGv

[7] Corte IDH, "Caso López Soto y otros Vs. Venezuela". Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de septiembre de 2018. Párr. 131.

11. Por lo que resulta importante que los Estados cuenten con una estrategia de prevención integral que advierta "[…] los factores de riesgo y a la vez fortalecer las instituciones para que puedan proporcionar una respuesta efectiva a los casos de violencia contra la mujer"[8]. Ello aunado al deber de "[…] adoptar normas o implementar medidas necesarias […] que permitan a las autoridades ofrecer una investigación con debida diligencia en casos de violencia contra la mujer […]"[9].

12. Este deber quedó reflejado en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que su artículo 2 establece la facultad de que "[l]a Federación, las entidades federativas y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias expedirán las normas legales y tomarán las medidas presupuestales y administrativas correspondientes, para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, de conformidad con los Tratados Internacionales en Materia de Derechos Humanos de las Mujeres, ratificados por el Estado mexicano". Por lo que todas las autoridades deben llevar cabo acciones tendentes a garantizar este derecho sin excepción.

13. Por los razonamientos anteriores, este Organismo no puede omitir pronunciarse respecto a los hechos materia de esta queja, ya que los mismos se constituyen como actos de violencia en contra de la mujer. Por lo que, su investigación, se constituye como un deber y obligación estatal irrenunciables. De ahí que, aun y cuando se cuenta con la determinación expresa de la agraviada de desistirse de su queja, esta Comisión no puede ignorar que, la falta de investigación de hechos que atenten gravemente contra la dignidad humana de las mujeres, constituiría un incumplimiento de las obligaciones del Estado que contravienen normas inderogables[10] (*jus cogens*) que establecen obligaciones para los Estados[11] como la de investigar y sancionar dichas prácticas, de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos que consagran tales obligaciones[12]. Por dichas razones, no es posible admitir el desistimiento de la quejosa **VD.** Máxime, si la propia quejosa señala, en el documento en el que manifiesta su desistimiento, la manera en que esta violación trastocó su dignidad.

VII. INMUNIDAD LEGISLATIVA

1. Este Organismo advierte que el Licenciado **AR**, al rendir su informe de autoridad, justificó en la inmunidad legislativa, que le confiere su encargo como Diputado, las manifestaciones expuestas en la sesión de la […] de la Asamblea Legislativa de la Sexagésima Tercera Legislatura del Estado de Zacatecas, celebrada [...]. Por lo cual, resulta importante, previo al desarrollo de los hechos materia de la presente Recomendación, analizar en qué consiste esta facultad, su fuente legal y sus límites.

2. Con las pruebas expuestas en el apartado anterior, con especial énfasis en la respuesta proporcionada a esta Comisión por parte del Diputado **AR**, se advierte el desconocimiento de éste por cuanto hace a la violencia simbólica, ya que se limitó a reproducir e interpretar en su literalidad el artículo 2° de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, con el argumento de que su conducta no corresponde a los supuestos que marca dicho precepto normativo. No obstante, reconoce que expresó la palabra *[…]* con la finalidad de que se aclarara si la quejosa era subordinada del […].

3. En este sentido, es necesario subrayar que, por la capacidad de difusión con la que cuenta el funcionario, su mensaje fue replicado en medios de comunicación y redes sociales, lo que además de afectar directamente a la quejosa, también, de manera indirecta, impactó al núcleo social que lo recibió, perpetuando así, la situación de discriminación de las mujeres en el espacio público.

---

[8] Ídem
[9] Ídem
[10] Corte IDH, caso Goiburú y otros vs. Paraguay, op. cit., párr. 128; Corte IDH, caso de la Masacre de La Rochela vs. Colombia. Sentencia del 11 de mayo de 2007, serie C No. 163, párr. 132; y Corte IDH, caso Anzualdo Castro vs. Perú. Sentencia del 22 de septiembre de 2009, Serie C No. 202, párr. 59
[11] Corte IDH, caso Goiburú y otros vs. Paraguay, op. cit., párr. 131.
[12] Corte IDH, caso de la Masacre de Las Dos Erres vs. Guatemala, op. cit., párr. 140.

4. Tomando en consideración que el lenguaje es un arma de poder, no debe ser utilizado para perpetuar relaciones desiguales, mucho menos para naturalizarlas o restarles importancia. Las capacidades de las mujeres están presentes y, por tanto, deben ser nombradas y reconocidas, no subestimadas o disminuidas.

5. En virtud a lo anterior, preocupa a esta Comisión el ánimo con el que el Diputado **AR**, apeló en su escrito de fecha 05 de febrero de 2019, a su envestidura de Diputado y a la figura de *Inmunidad Legislativa* para evadir la responsabilidad del impacto de sus manifestaciones. De acuerdo con el marco normativo vigente en nuestra entidad y en la federación, la violencia contra las mujeres no debe ni tiene que ser tolerada, provenga de donde provenga. Vivimos una crisis de derechos humanos que se ha traducido en violencia estructural contra las mujeres, y es necesario que todas las autoridades y servidores públicos, incluidos los Diputados del Poder Legislativo del Estado promuevan, respeten, protejan y garanticen los derechos humanos de las mujeres y en particular su derecho a vivir libre de violencia.

6. Atendiendo a lo anterior, el cargo de **AR**, como Diputado en la Sexagésima Tercera Legislatura del Estado, es de elección popular y emana de los artículos 5, 35, fracción II, 41, Bases I y V, Apartado C, 55 y 116, fracción II, de la de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los numerales 14, fracción IV, 50, 51, 52 párrafo primero y 147 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas; y artículos 13, 20, 21 y demás relativos a la Ley Electoral del Estado de Zacatecas.

7. Respecto al cargo público que ostenta **AR**, el primer párrafo del artículo 61, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos, y jamás podrán ser reconvenidos por ellas; similar contenido del ordinal 55 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, que establece que las y los Diputados son inviolables por las opiniones que emitan en el desempeño de su cargo, y no deberán ser reconvenidos por ellas.

8. De los anteriores preceptos constitucionales deriva la figura jurídica de inmunidad parlamentaria o inmunidad legislativa, la cual se refiere a la imposibilidad de la autoridad competente para detener o someter a un parlamentario –diputados, diputadas y senadores, senadoras-, durante el ejercicio de sus funciones, a un proceso penal por la posible comisión de algún delito, salvo en el caso de flagrancia. Este privilegio legal es también conocido como fuero constitucional.

9. Por tanto, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce y garantiza, entre otros, los derechos humanos de libertad de expresión y sistema de vida democrática, basada en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo, que se proyecta a todas las esferas, incluidas las estructuras jurídicas, la forma de Estado y la forma de gobierno.

10. La democracia y la libertad de expresión interactúan inescindiblemente, a través de una simbiosis, pues la primera depende de la aptitud de las personas de expresarse libremente acerca de los asuntos públicos y, por ende, de sus servidores, sin el temor de represalias por el Estado, lo que distingue a las democracias de las dictaduras. Esa es la razón por la cual el sistema constitucional mexicano otorga, por así decirlo, una cobertura más amplia para la libertad de expresión a las personas miembros de los cuerpos legislativos, lo que se refleja en la disposición contenida en el artículo 61 de la Carta Magna, en el sentido de que no son sancionables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos, y jamás podrán ser reconvenidos por ellas.

11. Queda claro que el objetivo de la inmunidad legislativa es dotar de independencia y libertad necesaria, a las y los legisladores en el ejercicio de sus encargos, por sus opiniones y votos emitidos dentro y fuera de los recintos legislativos. Con lo anterior, se garantiza la independencia del Congreso, que podría verse afectada por persecuciones

judiciales, arrestos o detenciones de sus miembros en razón de los discursos, exposiciones, mociones, informes y votos emitidos por éstos.

12. Cabe señalar que, en los casos de responsabilidad civil de las y los legisladores, puede ocurrir que no se requiera el procedimiento de declaración de procedencia para que, en su carácter de particulares, se les pueda demandar por la realización u omisión de actos o el incumplimiento de obligaciones señaladas en el Código Civil, los cuales siempre tienen una obligación reparadora o, en su caso, el otorgamiento de una indemnización[13].

13. Por otro lado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha emitido diversos criterios de interpretación respecto del artículo 61 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismos que han evolucionado de la siguiente manera: en diciembre del 2000, la Primera Sala indicó que "el interés a cuyo servicio se encuentra establecida la inviolabilidad o inmunidad legislativa es el de la protección de la libre discusión y decisión parlamentarias, decayendo tal protección cuando los actos -las manifestaciones- hayan sido realizados por su autor en calidad de ciudadano, fuera del ejercicio de competencias y funciones que le pudieran corresponder como legislador, por lo que puede afirmarse que el ámbito de esta protección se delimita por la suma de tres condiciones: a) sólo opera a favor de diputados y senadores; b) por las opiniones; y, c) que manifiesten en el desempeño de sus cargos. Así, la inviolabilidad dispensa al legislador una protección de fondo, absoluta, llevada al grado de irresponsabilidad, perpetua por cuanto que sus beneficios no están sujetos a periodo alguno; de tal suerte que prácticamente lo sitúa en una posición de excepción, en todas aquellas circunstancias en que éste ejercite su función de representante público, pues automáticamente opera una derogación, es decir, una pérdida de vigencia y eficacia de los preceptos constitucionales que imponen a los poderes públicos el deber de responder a sus propios actos y de los que garantizan a todos los ciudadanos una tutela efectiva de sus derechos e intereses legítimos, lo que obliga al gobierno y a los particulares a soportar las manifestaciones que viertan en su contra los legisladores, aun cuando subjetivamente puedan considerarlas difamatorias. En consecuencia, la protección a los legisladores sólo por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos refrenda el objetivo de la mencionada garantía, o sea, resguardar al ejercicio del Poder Legislativo, pues aquéllos lo realizan y hacen de la palabra -del discurso- el instrumento motriz y la forma privilegiada para ejercer su función pública."[14]

14. Sin embargo, en febrero de 2011, el Pleno del más Alto Tribunal del país expresó, que el anterior criterio, "debe precisarse en el sentido de que el bien jurídico protegido mediante la inviolabilidad parlamentaria es la función del Poder Legislativo, por lo que mediante esta figura no se protege cualquier opinión emitida por un diputado o por un senador, sino únicamente cuando lo haga en el desempeño de su función parlamentaria, es decir, que al situarse en ese determinado momento, el legislador haya acudido a desempeñar una actividad definida en la ley como una de sus atribuciones de diputado o de senador, pues sólo en este supuesto se actualiza la función parlamentaria como bien jurídico protegido en términos del artículo 61 Constitucional."[15]

15. De lo anterior, puede advertirse que la figura en comento, protege la libre discusión y decisión parlamentarias (la función del Poder Legislativo[16]), es decir las manifestaciones, pero se encuentra limitada a tres condiciones:

a) sólo opera a favor de las y los diputados y senadores,
b) por las opiniones y,
c) que, estas manifestaciones sean en el desempeño de sus cargos.

---

[13] http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=127 Consultado el 09 de julio de 2019.
[14] Tesis: 1ª. XXX/2000
[15] Tesis: P. I/2011
[16] En Zacatecas, las funciones que las y los legisladores se encuentran establecidas en el Título Tercero, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, destacando, por el tópico de que se trata este Instrumento, las enunciadas en las fracciones XI y XVI del artículo 28, de los Derechos y Obligaciones de los Diputados, que establecen: "Además de los derechos que les confiere la Constitución estatal, tendrán los siguientes: (…) XI. Intervenir en los trabajos, deliberaciones, debates y comparecencias, tanto del Pleno, como de las comisiones; (…) XVI. Participar con voz en todas las comisiones."

16. Sin embargo, las manifestaciones u opiniones deben ceñirse al desempeño de su función parlamentaria, es decir, que la o el legislador haya acudido a desempeñar una actividad definida en la ley como una de sus atribuciones de diputado o de senador.

17. Este lenguaje parlamentario, contiene, por otro lado, el concepto "reconvenir" que es un verbo que se emplea para significar la exigencia de responder por el contenido de una opinión expuesta con motivo de la función hacedora de las leyes; y ese es el sentido que debe darse al término "reconvenir" contenido en el artículo 61 Constitucional, pues de manera enfática el Constituyente ha asociado el referido vocablo a la idea de libertad de expresión parlamentaria, proscribiendo todo intento de sancionar lo que por virtud de dicha actividad se externe, bajo la máxima de que los legisladores "son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos, y jamás podrán ser reconvenidos por ellas".[17]

18. En ese mismo sentido, la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, establece en su artículo 31, que las diputadas y diputados gozarán de la **inviolabilidad** que les reconoce la Constitución estatal, por lo que **no podrán ser reconvenidos por las opiniones** que manifiesten en el desempeño de sus funciones.

19. La Primer Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció las bases para la aplicación de dos figuras constitucionales distintas entre sí y aplicables entre otros, al cargo de diputado, como son la **inmunidad parlamentaria** y el **fuero constitucional**; pues según se trate de responsabilidad penal y de reclamaciones de índole civil que sean imputadas a un diputado.

20. Así, advirtió que el artículo 61 de la Constitución Federal consagra la figura de la "inmunidad parlamentaria" como una garantía otorgada a las y los diputados federales y senadores, sólo por lo que hace a las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos, a grado tal que nunca podrán ser reconvenidos por ellas. Mientras que el diverso artículo 111 de la propia Carta magna, contempla la institución del "fuero constitucional", bajo la denominación actual de declaración de procedencia, como una garantía de carácter procesal, otorgada a diversos funcionarios públicos expresamente enunciados, entre ellos, las y los diputados y senadores.

21. Y concluyó que, si la reclamación jurisdiccional que se endereza contra un diputado es de índole civil, exclusivamente debe ponderarse el fuero-inmunidad a que se refiere el artículo 61 constitucional, sin tomar en consideración el fuero de procedibilidad consagrado en el artículo 111 constitucional; lo que no implica que exista impedimento para demandarlo en la vía civil por actos que realice como particular, ajenos a su encargo o al quehacer parlamentario.[18]

22. No pasa desapercibido que para la Organización Global de Parlamentarios contra la Corrupción (GOPAC, por sus siglas en inglés), “La inmunidad parlamentaria es esencial para la independencia parlamentaria eficaz”, así se desprende de la exposición de motivos por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos[19].

23. No se debe perder de vista que “el interés a cuyo servicio se encuentra establecida la inviolabilidad o inmunidad legislativa es el de la protección de la libre discusión y decisión parlamentarias, decayendo tal protección cuando los actos -las manifestaciones- hayan sido realizados por su autor en calidad de ciudadano, fuera del ejercicio de competencias y funciones que le pudieran corresponder como legislador, por lo que puede afirmarse que el ámbito de esta protección se delimita por la suma de tres condiciones: a) sólo opera a favor de diputados y senadores; b) por las opiniones; y, c) que manifiesten en el desempeño de sus cargos. Así, la inviolabilidad dispensa al legislador una protección de fondo, absoluta, llevada al grado de irresponsabilidad, perpetua por cuanto que sus

---

[17] Tesis: 1a. XXXII/2000
[18] Tesis: 1a. XXVII/2000
[19] http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_comision_permanente/documento/64472

beneficios no están sujetos a periodo alguno; de tal suerte que prácticamente lo sitúa en una posición de excepción, en todas aquellas circunstancias en que éste ejercite su función de representante público, pues automáticamente opera una derogación, es decir, una pérdida de vigencia y eficacia de los preceptos constitucionales que imponen a los poderes públicos el deber de responder a sus propios actos y de los que garantizan a todos los ciudadanos una tutela efectiva de sus derechos e intereses legítimos, lo que obliga al gobierno y a los particulares a soportar las manifestaciones que viertan en su contra los legisladores, aun cuando subjetivamente puedan considerarlas difamatorias. En consecuencia, la protección a los legisladores sólo por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos refrenda el objetivo de la mencionada garantía, o sea, resguardar al ejercicio del Poder Legislativo, pues aquéllos lo realizan y hacen de la palabra -del discurso- el instrumento motriz y la forma privilegiada para ejercer su función pública.” Así lo dijo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su Tesis: 1a. XXX/2000.

24. Desde el punto de vista del derecho comparado, las Constituciones extranjeras regulan diversamente la amplitud de la inmunidad legislativa. Es interesante advertir la protección explícita de la expresión de la opinión y voluntad de las y los parlamentarios en textos constitucionales de diferentes países que, en lo relativo a la inmunidad son los siguientes:

> Art. 30. Finlandia: "No se podrá impedir a los diputados el ejercicio de sus mandatos. "Los diputados no podrán ser inculpados ni detenidos por las opiniones manifestadas en las deliberaciones ni por su proceder en la tramitación de sus asuntos."
>
> Art. 68. Italia: "Los miembros del Parlamento no podrán ser perseguidos por las opiniones que expresen ni por los votos que emitan durante el ejercicio de sus funciones."
>
> Art. 61. Grecia: "Los Diputados no podrán ser perseguidos ni interrogados de forma alguna por las opiniones o votos emitidos en el ejercicio de sus funciones parlamentarias."
>
> Art. 71. España: "Los diputados y senadores gozarán de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones."
>
> Art. 58. Bélgica: "Ningún miembro de una u otra Cámara puede ser perseguido ni investigado por opiniones y votos emitidos en el ejercicio de sus funciones."
>
> Art. 26. Francia: "Ningún miembro del Parlamento podrá ser procesado, perseguido, detenido, preso o juzgado por opiniones o votos que haya emitido en el ejercicio de sus funciones."
>
> Art. 160. Portugal: "Los diputados no responderán civil, criminal o disciplinariamente por los votos y opiniones que emitan en el ejercicio de sus funciones."
>
> Art. 70. Rumania: "Los diputados y senadores no pueden ser considerados responsables jurídicamente por los votos o por las opiniones políticas manifestadas en el ejercicio de sus funciones."
>
> Art. 68. Argentina: "Ninguno de los miembros del Congreso puede se acusado, interrogado judicialmente, ni molestado por las opiniones o discursos que emita desempeñando su mandato de legislador."
>
> Art. 53. Brasil: "Los diputados y senadores son inviolables por sus opiniones, palabras y votos."

> Art. 58. Chile: "Los diputados y senadores sólo son inviolables por las opiniones que manifiesten y los votos que emitan en el desempeño de sus cargos, en sesiones de Sala o Comisión."

25. Por lo que respecta al ámbito donde se ejerce la libre expresión que goza de protección, debe convenirse en que ampare todo género de actividades desarrolladas dentro o fuera del recinto, y no solamente en el Pleno o en las Comisiones. Entonces, la llamada inmunidad legislativa está asociada a la libertad de expresión de ideas y debate parlamentario, maximizada en este caso por la naturaleza de esa representación política.

26. Al respecto, el doctrinario Miguel Carbonell Sánchez, menciona que: “El artículo 61 de la Constitución mexicana prevé, en su primer párrafo, una protección especial para las opiniones que emitan los legisladores del Congreso de la Unión en el desempeño de sus funciones; el sentido de este precepto es proteger a los parlamentarios a fin de que se puedan expresar libremente, ejerciendo hasta donde lo consideren prudente su derecho de crítica contra el gobierno, sin que por ello puedan ser arrestados o demandados. La Constitución mexicana otorga prerrogativas para funcionarios públicos y no verdaderos derechos fundamentales; esto implica, entre otras cuestiones, que el método de interpretación de aquellas no es el mismo que el que se aplica a los derechos fundamentales. En consecuencia, las prerrogativas parlamentarias deben interpretarse restrictivamente, sobre todo si pueden entrar en conflicto con un derecho fundamental (por ejemplo, si pueden resultar en violaciones al derecho a la intimidad o al honor), incluyendo el derecho que tienen todas las personas a acudir ante la tribuna para que, en condiciones de igualdad, se dirima cualquier cuestión que juzguen como litigiosa”.

27. Entonces, el deber de las y los parlamentarios es conducirse con ética y respeto a la investidura de Congresistas; en ese sentido Carbonell menciona que: “Desde un punto de vista de filosofía política y de teoría de la justicia, es obvio que el adecuado desarrollo y preservación de los derechos fundamentales en una sociedad democrática exige que los ciudadanos asuman una serie de deberes no en el sentido jurídico del término, sino en un cierto sentido moral o cívico. Es decir, para lograr la vigencia efectiva de los derechos todos debemos asumir una ética pública que refleje el compromiso con los valores que esos derechos buscan defender y preservar.”

28. En conclusión, la única restricción con que cuenta la inmunidad legislativa, como regla general, en la libertad de expresión, es aquella dirigida a todos los ciudadanos; por lo que las y los parlamentarios cuentan los límites en su libertad de expresión democrática, con los derechos de terceros, la perturbación del orden público, o la comisión de delitos.

29. En ese mismo sentido resolvió el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, el Amparo Directo 659/2008, al precisar que “**las prerrogativas parlamentarias deben estar en balance con los derechos fundamentales de todas las personas**; de ahí que el método de interpretación de las mismas no debe ser restrictivo en esos casos, lo que debe analizarse desde distinta óptica si éstas se ejercen en relación con funcionarios de la misma categoría o especie, con quienes pueden entrar en conflicto verbal o en reconvenciones del mismo orden, sin que ello implique lesión a algún derecho fundamental entre ambos como el del honor; de ahí que lo expresado en los debates relativos al ejercicio de sus cargos o comisiones no puede ser dirimido como cuestión litigiosa pretendiendo alegar daño al honor por calumnias.”

30. El anterior criterio, analizado a *contrario sensu*, corrobora que, no todas las expresiones efectuadas por las y los diputados, se encuentran salvaguardadas en la figura de inmunidad parlamentaria o legislativa, pues esta facultad escapa al ámbito de dirigir expresiones que transgredan derechos humanos.

31. En conclusión, las manifestaciones parlamentarias, no escapan al deber que tiene toda autoridad de respetar y proteger los derechos humanos, encontrando el tope o límite en que están prohibidas las expresiones de propaganda a favor de la guerra, apología del

odio nacional, racial o religioso que constituya **incitación a la discriminación**, la hostilidad **o la violencia,** estará prohibida por la ley.[20]

32. Por tanto y toda vez que la quejosa se duele de las expresiones que vertió el Diputado **AR**, al dirigirse particularmente a ella, con algunas interrogantes y un calificativo que en sí mismo resulta violatorio del derecho que le asiste como mujer para vivir libre de violencia, concretamente con la violencia simbólica, por estereotipos de género, concebidos estos como la preconcepción de atributos o características poseídas o papeles que son o deberían ser ejecutados por hombres y mujeres, respectivamente. Entonces resulta necesario el pronunciamiento al respecto, pues este Organismo no puede soslayar o permitir que, bajo el amparo de la figura de inmunidad legislativa, se atropellen derechos de las mujeres.

VIII. SOBRE LOS DERECHOS VULNERADOS.

A. Derecho de las mujeres a vivir libres de violencia

1. La Organización de las Naciones Unidas ha reconocido que la violencia de género constituye un obstáculo para la igualdad y el desarrollo, cuyo origen se encuentra en las relaciones de poder históricamente desiguales entre las mujeres y los hombres, que se manifiestan en actos de control y dominación que conducen a la discriminación y violación de los derechos humanos de las primeras. Es decir, que restringen el ejercicio pleno de sus derechos. Ante esta situación, tanto en el sistema normativo nacional como internacional (regional y universal) de protección de derechos humanos, se han adoptado diversos instrumentos que salvaguardan el derecho de las mujeres a no ser objeto de discriminación y violencia. Con ello, los Estados han reconocido la situación histórica de subordinación y marginación que han experimentado las mujeres en la sociedad, y han generado un consenso de que ésta constituye un problema público que debe ser atendido a través de acciones dirigidas a su prevención, atención, sanción y erradicación.

2. El artículo 1° de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), define a la violencia contra la mujer como "[…] cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado".

3. El artículo 3 de la misma Convención consagra el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, en el que se prevé que "[t]oda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado". Dicha disposición ha creado un eco en las legislaciones regionales que han replicado el establecimiento de preceptos dirigidas a proteger y garantizar este derecho.

4. Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CrIDH) ha remarcado lo establecido en el preámbulo de la Convención de Belém do Pará, sobre que este tipo de violencia, ya que ésta "[…] no solo constituye una violación de los derechos humanos", sino que es "una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres"[21].

5. El Comité de la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), ha reconocido que el fenómeno de la violencia de género "[…] constituye un grave obstáculo para el logro de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y para el disfrute por parte de la mujer de sus derechos humanos y libertades fundamentales, consagrados en la Convención"[22].

---

[20] Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, artículo 20.
[21] Corte IDH. "Caso Favela Nova Brasília Vs. Brasil". Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de febrero de 2017.Párr 245.
[22] Comité CEDAW, Recomendación General 35. "Sobre la violencia por razón de género contra la mujer, por la que se actualiza la Recomendación General 19", CEDAW/C/GC/35. Párr. 10.

6. En este sentido, la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció en el párrafo 20, de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el compromiso de eliminar todas las formas de discriminación y violencia contra las mujeres. Compromiso que, de manera específica, se estableció en la meta 5.2, que señala como objetivo la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres, en los ámbitos público y privado.

7. Teniendo en consideración que la violencia contra las mujeres "no es un asunto privado, sino una violación a los derechos humanos, que genera responsabilidad estatal"[23], la CIDH ha sostenido que "[l]a jurisprudencia internacional [establece] el deber del Estado de actuar con la debida diligencia para proteger los derechos humanos y los derechos de las mujeres", señalando a su vez que "[e]sta obligación implica cuatro componentes: prevención, investigación, sanción y reparación de las violaciones a los derechos humanos"[24].

8. Por su parte, la Convención de Belém do Pará establece en su artículo 7 el deber estatal de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, debiendo adoptar para ello, un amplio abanico de acciones, tanto de índole legislativo, como administrativo, para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres.

9. En razón a lo anterior, la CrIDH ha señalado el deber de los Estados consistente en adoptar medidas integrales dirigidas a garantizar la debida diligencia en los casos de violencia contra las mujeres, haciendo hincapié en la necesidad de contar con un adecuado marco jurídico de protección, con una aplicación efectiva del mismo y con políticas de prevención y prácticas que permitan actuar de una manera eficaz ante las denuncias"[25].

10. Es importante precisar que, los Estados, deben contar con una estrategia de prevención integral que permita detectar los factores de riesgo, y a la vez fortalezca a las instituciones para que puedan proporcionar una respuesta efectiva a los casos de violencia contra la mujer.

11. En el ámbito nacional, el primer párrafo del artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que en nuestro país todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la propia Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte, así como de las garantías necesarias para su protección. En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que "los derechos humanos, en su conjunto, constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional, conforme al cual debe analizarse la validez de las normas y actos que forman parte del orden jurídico mexicano".[26]

12. El segundo párrafo del artículo 1° Constitucional establece que las normas relativas a los derechos humanos deberán interpretarse a partir de los principios de interpretación conforme y pro persona; a su vez, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha entendido que el principio de supremacía constitucional implica que a la eficacia normativa directa de la Constitución se añade su eficacia como marco de referencia o criterio dominante en la interpretación de las restantes normas[27]. En sentido amplio, la interpretación conforme implica que todas las autoridades del Estado mexicano deben interpretar las leyes a la luz y conforme a los derechos humanos previstos en la constitución y tratados internacionales,

---

[23] Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, "Violencia contra las mujeres, Serie de información sobre salud y derechos sexuales y reproductivos". Disponible: https://bit.ly/2JCtl1I

[24] CIDH, "El Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y Discriminación en Haití", 2009, OEA/Ser.L/V/II, párr. 80. Disponible en: https://bit.ly/2GetuGv

[25] Corte IDH, "Caso López Soto y otros Vs. Venezuela". Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de septiembre de 2018. Párr. 131.

[26] Ver Tesis: P./J. 20/2014 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Tomo I, abril 2014, p. 202.En este sentido ver, SCJN, Tesis Jurisprudencial P./J.20/2014 (10a.), Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, abril de2014, Tomo I, pág. 202; tesis de rubro Derechos humanos contenidos en la constitución y en los tratados internacionales. Constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional, pero cuando en la constitución haya una restricción expresa al ejercicio de aquéllos, se debe estar a lo que establece el texto constitucional.

[27]Ver Tesis: 1a./J. 37/2017 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Tomo I, mayo de 2017, p. 239.
tesis de rubro Interpretación conforme. Naturaleza y alcances a la luz del principio *pro persona*.

mientras que en sentido estricto implica que cuando existan varias interpretaciones válidas, preferirá aquella que sea acorde a la norma constitucional y a los instrumentos internacionales[28]. De otro lado, el Máximo Tribunal del país ha entendido que el principio pro persona busca maximizar la vigencia y el respeto de los derechos humanos y permite "optar por la aplicación o interpretación de la norma que los favorezca en mayor medida, o bien, que implique menores restricciones a su ejercicio".[29]

13. Por otro lado, en el tercer párrafo del citado artículo 1° de la Constitución federal se establece que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen las obligaciones generales de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos y consecuencialmente los deberes especiales prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos, todo lo cual debe ser realizado de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

14. En concordancia con lo anterior, el artículo 1° de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, establece la obligación del Estado Mexicano consistente en garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, en cumplimiento a los principios de igualdad y de no discriminación. En este sentido, el artículo 5, fracción IV, define a la violencia contra las mujeres como: "[c]ualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público".

15. Mientras que, el artículo 2 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, establece que "[l]a Federación, las entidades federativas y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias expedirán las normas legales y tomarán las medidas presupuestales y administrativas correspondientes, para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, de conformidad con los Tratados Internacionales en Materia de Derechos Humanos de las Mujeres, ratificados por el Estado mexicano". Por lo que todas las autoridades deben llevar cabo acciones tendentes a garantizar este derecho sin excepción.

16. Como seres humanos, las mujeres gozan de todos y cada uno de los derechos reconocidos y garantizados por el Estado Mexicano en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los instrumentos internacionales y nacionales; sin embargo, dado el reconocimiento de la condición de desigualdad en la que se desarrolla, y que, se refleja en la violación sistemática de los derechos humanos de las mujeres, es necesario particularizar en ellos, para los órganos del estado que tienen bajo sus tutela estos derechos, como los son las y los ministerios públicos, policías y jueces.

17. Estos derechos son: derecho a que se respete su vida; derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral; derecho a la libertad y a la seguridad personales; derecho a no ser sometida a torturas; derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y que se proteja a su familia; derecho a igualdad de protección ante la ley y de la ley; derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos; derecho a la libertad de asociación; derecho a la libertad de profesar la religión y las creencias propias dentro de la ley; derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones.

18. Además, los siguientes: derecho a la igualdad; derecho a la no discriminación; derecho a vivir una vida libre de violencia; derecho al pleno desarrollo de su persona; derecho al acceso a la justicia, a fin de garantizar su ejercicio libre y pleno, y tomando en cuenta que cuando se trata de casos de mujeres, niñas y adolescentes en situación de violencia, se debe de tomar en cuenta que existen conceptos y principios específicos que se deben de aplicar para lograr ese objetivo.

---

[28]Consultar, Caballero, José Luis (coord.), Sánchez Cordero, Olga, "El Control de Constitucionalidad en México, a partir de la Reforma de junio de 2011", Derechos constitucionales e internacionales. Perspectivas, retos y debates, México, Tirant lo Blanch, 2018, pp. 930-931.

[29] Tesis 1a. CCCXXVII/2014 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Tomo I, Octubre de 2014. tesis de rubro Principio *pro persona*. requisitos mínimos para que se atienda el fondo de la solicitud de su aplicación, o la impugnación de su omisión por la autoridad responsable.

19. Por tanto, la violencia de género contra las mujeres es una forma de discriminación y una violación de los derechos humanos, que impide a éstas alcanzar su plena realización personal y desarrollo; la cual, tiene su origen en las estructuras sociales basadas en la desigualdad y el abuso de poder, fundamentados en la asignación de roles diferentes a mujeres y hombres en función de su sexo y en el otorgamiento de un valor superior a los considerados como masculinos.

20. Las violencias contra las mujeres pueden ser perpetradas por particulares o por servidores públicos; en el segundo de los casos, **la más normalizada** es **la violencia institucional** que se refiere a **"los actos u omisiones de las personas con calidad de servidor público que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia**[30].

21. En ese mismo sentido, la Organización de los Estados Americanos, aprobó la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la cual entiende por violencia de género contra la mujer *cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado*[31]. Luego, ese mismo instrumento, en el artículo 2 establece que "se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica: a. que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual; b. que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y c. que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera que ocurra". Además, reconoce que la violencia contra las mujeres es una de las manifestaciones de la desigualdad entre mujeres y hombres, que se traduce en la violación de sus derechos humanos y el entorpecimiento de su ejercicio pleno.

22. La importancia de dicho instrumento radica en que se reconoce, de manera explícita, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como privado. Así, la convención visibiliza que la violencia puede ejercerse dentro de la familia, en la comunidad, el trabajo, en instituciones educativas o de salud; o bien, que puede ser perpetuada o tolerada por el propio Estado y sus agentes.

23. La violencia como causa y consecuencia de discriminación en contra de personas o grupos en situación de desventaja o de atención prioritaria obliga al Estado a adoptar medidas para erradicarla[32] a efecto de garantizar el pleno ejercicio de los derechos de todas las personas, con principal atención en las personas que "debido a la desigualdad estructural, enfrentan discriminación, exclusión, maltrato, abuso, violencia y mayores obstáculos para el pleno ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales"[33].

24. El derecho a una vida libre de violencia abre la posibilidad del efectivo ejercicio de los demás derechos humanos de las personas, en tanto que, particularmente, busca garantizar que las mujeres sean libres de toda forma de discriminación y violencia, ambas como manifestaciones de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres que impiden y anulan gravemente el goce de derechos en comparación con el otro género[34].

---

[30] Artículo 14 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Zacatecas.
[31] Artículo 1 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.
[32] Primera Sala, "Derecho de las mujeres, niñas, niños y adolescentes a una vida libre de violencia. Los derechos a la igualdad y no discriminación, y a la integridad y dignidad personales, constituyen límites válidos a la aplicación de normas de derecho consuetudinario o indígena", tesis aislada 1a. CCC/2018 (10a.) en materia constitucional, en *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, décima época, libro lxi, t. 1, 7 de diciembre de 2018, p. 298.
[33] Constitución Política de la Ciudad de México, artículo 11, apartado A.
[34] Corte idh, *Caso Velásquez Paiz y otros* vs. *Guatemala (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas)*, Sentencia del 19 de noviembre de 2015, serie C, núm. 307, párr. 175; y Corte idh, *Caso Rosendo Cantú y otra* vs. *México*

25. Como ha precisado la relatora especial de las Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer**, todos los derechos humanos susceptibles de ser vulnerados en casos de violencia contra las mujeres forman parte del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia**[35].

26. En este sentido, todas las autoridades del Estado mexicano deben interpretar las leyes a la luz y conforme a los derechos humanos previstos en la constitución y tratados internacionales, mientras que, en sentido estricto, implica que cuando existan varias interpretaciones válidas, preferirá aquella que sea acorde a la norma constitucional y a los instrumentos internacionales[36]. Por otra parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha entendido que el principio pro persona busca maximizar la vigencia y el respeto de los derechos humanos y permite "optar por la aplicación o interpretación de la norma que favorezca en mayor medida, o bien, que implique menores restricciones a su ejercicio[37]".

27. En este contexto, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas en el ámbito de su competencia como organismo protector de derechos humanos tiene la atribución legal[38], constitucional[39] y convencional[40] de protección de los derechos humanos, inclusive, de ser el caso, la de realizar un control de convencionalidad ex oficio[41].

(Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas), Sentencia del 31 de agosto de 2010, serie C, núm. 216, párr. 120; y Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), adoptada por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, Belém do Pará, 9 de junio de 1994, artículo 5º.

[35] Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, *Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias*, A/HRC/35/30, 13 de junio de 2017, párr. 39.

[36] Consultar, Caballero, José Luis (coord.), Sánchez Cordero, Olga, "El Control de Constitucionalidad en México, a partir de la Reforma de junio de 2011", Derechos constitucionales e internacionales, Perspectivas, Retos y Debates, México, Tirant lo Blanch, 2018, pp.930-931.

[37] Ver Tesis 1ª. CCCXXVII/2014 (10ª.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Tomo I, Octubre de 2014.

[38]Artículo 3 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, establece que esta Comisión es un organismo autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios que tiene por objeto la protección, respeto, defensa, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos previstos por el orden jurídico mexicano.

[39] El tercer párrafo del artículo 1o. de la Constitución Política de la Estados Unidos Mexicanos(CPEUM) establece que "todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. "El tercer párrafo del artículo 1o. de la CPEUM establece que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley."

[40] OEA, Convención Americana sobre Derechos Humanos, San José, Costa Rica, 1969, art.1.1; ONU, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Nueva York, Estados Unidos, 1966,ONU, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Nueva York, Estados Unidos, art. 2.2; OEA, Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém Do Pará), Belém do Pará, Brasil, 1994, art.7.; ONU, Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW),Nueva York Estados Unidos, 1979, arts. 2 y 3. Los artículos 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 2.2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém Do Pará), 2 y 3 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), establecen dicha obligación para el Estado en su conjunto, incluyendo claramente a esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas.

[41] [L]a protección de los derechos humanos constituye un límite infranqueable a la regla de mayorías, es decir, a la esfera de lo "susceptible de ser decidido" por parte de las mayorías en instancias democráticas, en las cuales también debe primar un "control de convencionalidad" [...], que es función y tarea de cualquier autoridad pública y no sólo del Poder Judicial. Corte IDH, Caso Gelman Vs. Uruguay. Fondo y Reparaciones, Sentencia de 24 de febrero de 2011, Serie C No.221, San José, Costa Rica, párr. 239. [E]n el ámbito de su competencia "todas las autoridades y órganos de un Estado Parte en la Convención tienen la obligación de ejercer un 'control de convencionalidad". Corte IDH. Caso de personas dominicanas y haitianas expulsadas Vs. República Dominicana. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 28de agosto de 2014, Serie C No. 282, San José, Costa Rica, párr. 497. Esta obligación vincula a todos los poderes y órganos estatales en su conjunto, los cuales se encuentran obligados a ejercer un control "de convencionalidad" ex officio entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. Corte IDH. Caso Rochac Hernández y otros Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 14 de octubre de 2014, Serie C No. 285, San José, Costa Rica, párr. 213. [L]a protección de los derechos humanos constituye un límite infranqueable a la regla de mayorías, es decir, a la esfera de lo "susceptible de ser decidido" por parte de las mayorías en instancias democráticas, en las cuales también debe primar un "control de convencionalidad" [...], que es función y tarea de cualquier autoridad pública y no sólo del Poder Judicial. Caso Gelman Vs. Uruguay. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de febrero de 2011.párr. 239. [E]n el ámbito de su competencia "todas las autoridades y órganos de un Estado Parteen la Convención tienen la obligación de ejercer un 'control de convencionalidad". Corte IDH. Caso de personas dominicanas y haitianas expulsadas Vs. República Dominicana. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de agosto de 2014. párr. 497. Esta obligación vincula a todos los poderes y órganos estatales en su conjunto, los cuales se encuentran obligados a ejercer un control "de

Así, este Organismo funda sus recomendaciones en las disposiciones de derechos humanos establecidas tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en las diversas fuentes del derecho internacional de los derechos humanos, inclusive la interpretación que los organismos internacionales de derechos humanos realizan respecto del contenido y alcance de los derechos de fuente internacional, favoreciendo en todos los casos la mayor protección de las personas y sus derechos humanos.

28. Por lo que, atendiendo al contenido del tercer párrafo del artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es deber de este Organismo, como de todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos y consecuencialmente los deberes especiales de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos, todo lo cual debe ser realizado de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

29. Entonces, en cumplimiento a estas obligaciones y con apego a las facultades que tiene esta Comisión, al momento de tener conocimiento del presente caso, se calificó la queja de procedente por presuntas violaciones al derecho a una vida libre de violencia, en agravio de **VD.**

30. Antes de desarrollar el contenido y alcance del derecho humano calificado, es necesario apuntar que, en este instrumento recomendatorio, se aborda de manera transversal la perspectiva de género.

- **Transversalidad de la perspectiva de género**

31. La perspectiva de género es una visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres. Se propone eliminar las causas de la opresión de género como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas basada en el género. Promueve la igualdad entre los géneros a través de la equidad, el adelanto y el bienestar de las mujeres; contribuye a construir una sociedad en donde las mujeres y los hombres tengan el mismo valor, la igualdad de derechos y oportunidades para acceder a los recursos económicos y a la representación política y social en los ámbitos de toma de decisiones[42].

32. Por tanto, sin que medie petición de parte, todas las autoridades del Estado deben:

a. Identificar primeramente si existen situaciones de poder que por cuestiones de género den cuenta de un desequilibrio entre las partes de la controversia;
b. Cuestionar los hechos y valorar las pruebas desechando cualquier estereotipo o prejuicio de género, a fin de visualizar las situaciones de desventaja provocadas por condiciones de sexo o género;
c. En caso de que el material probatorio no sea suficiente para aclarar la situación de violencia, vulnerabilidad o discriminación por razones de género, ordenar las pruebas necesarias para visibilizar dichas situaciones;
d. De detectarse la situación de desventaja por cuestiones de género, cuestionar la neutralidad del derecho aplicable, así como evaluar el impacto diferenciado de la solución propuesta para buscar una resolución justa e igualitaria de acuerdo al contexto de desigualdad por condiciones de género;
e. Para ello debe aplicarse los estándares de derechos humanos de todas las personas involucradas, […] y,
f. Considerar que el método exige que, en todo momento, se evite el uso del lenguaje basado en estereotipos o prejuicios, por lo que debe procurarse un lenguaje incluyente con el objeto de asegurar un acceso a la justicia sin discriminación por motivos de género.[43]

---

convencionalidad" ex oficio entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. Corte IDH. Caso Rochac Hernández y otros Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 14 de octubre de 2014. párr. 213.

[42] Fracción IX del artículo 5° de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

[43] Tesis 1ª./J.22/2016, *Seminario Judicial de la Federación,* Décima Época, t.II, abril de 2016, p.836.

33. La aplicación de la perspectiva de género, además de descubrir las relaciones de poder o asimetrías existentes en las relaciones de mujeres y hombres, permite también:

a. Visibilizar los intereses y necesidades de las mujeres;
b. Establecer simetría y equivalencia en las posiciones y relaciones de poder de mujeres y hombres;
c. Postular la igualdad como la condición política fundamental de la existencia humana y de la auténtica democracia;
d. Generar las herramientas teóricas, metodológicas y técnicas necesarias para diseñar y ejecutar políticas que empoderen a las mujeres y hagan efectiva la igualdad en los hechos;
e. Cuestionar los pilares fundamentales que sostienen el patriarcado y que son fronteras que operan como sus mecanismos de perpetuación y proponer acciones para su erradicación[44].

34. Las oportunidades que ofrece la aplicación de la perspectiva de género invitan a la transformación de la narrativa dominante; como propuesta política, este enfoque busca ser democratizador al plantear como objetivo la igualdad de derechos, igualdad en la valoración humana, en la prohibición de la discriminación, igualdad con la aceptación de la diversidad, en la autonomía y autodeterminación de las opciones a seguir en la efectuación de la vida[45].

35. Con el uso de este enfoque, también podremos acercarnos a las construcciones sociales que crean simbolismos culturales y concepciones normativas sobre la experiencia de ser hombre o mujer.

36. En el presente caso, la forma en que se envió el mensaje de violencia fue a través del lenguaje verbal, por tanto, suele no dársele importancia, ya que históricamente se ha naturalizado ese contenido; no obstante, nos enfrentamos a tiempos donde la voz se vuelve motor de cambio y por ello es importante su uso responsable. Lo simbólico es relevante.

- **Violencia simbólica.**

37. Las expresiones de violencia simbólica visibilizan las asimetrías de poder naturalizadas por constructos sociales. La transmisión de información de manera estereotipada, dicotómica o sesgada contribuye a mantener y perpetuar el sistema patriarcal. El impacto de esta difusión hoy en día es trascendente en especial frente a los medios de comunicación y las redes sociales.

38. Mediante la aplicación de la perspectiva de género, encontramos en las expresiones de violencia un elemento fundamental, que es el poder, generalmente desigual, donde unas personas desarrollan una sumisión expresa o no, respecto de otras. Silvia Beatriz López Safi[46] define la *violencia simbólica* a partir del concepto dado por Pierre Bourdieu en cuanto a la “reproducción del dominio masculino sobre la naturalización de las diferencias entre los géneros” con base en sus estudios sobre la sociedad. Por tanto, esta violencia se conecta con conceptos como el *habitus* entendido como “el proceso a través del cual se desarrolla la reproducción cultural y la naturalización de determinados comportamientos y valores.

39. El mismo sociólogo francés Pierre Bourdieu que estableció, el término violencia simbólica, la describió como aquella violencia que no utiliza la fuerza física, sino la imposición del poder y la autoridad; señalando además que, sus manifestaciones son tan sutiles e imperceptibles que es permitida y aceptada por el dominador y el dominado. Asimismo, la consideró como la base de todos los tipos de violencia; ya que, a través de las costumbres, tradiciones y prácticas cotidianas se refuerzan y reproducen las relaciones basadas en el dominio y la sumisión.

---

[44] García Prince, Evangelina (2013) Guía 1. ¿Qué es Género? Conceptos básicos. México: FLACSO Sede México., p.8.
[45] Ídem.
[46] *La violencia simbólica en la construcción social del Género*. ACADEMO Revista de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades. Diciembre 2015, Vol.2. No.2.

40. En este sentido, la violencia simbólica es el sometimiento de unos sujetos respecto de otros, a través del proceso de socialización que permite naturalizar las relaciones de poder, las que se convierten en incuestionables a partir de asimetrías entre las cuales se encentran las basadas en el género. Este proceso de socialización el aprendizaje del control emocional se da a través de hábitos y disposiciones que aparecen de modo "inconsciente", con lo cual el "sometimiento voluntario" es justificado por la persona sometida y la creencia que esa es la única vía o camino, en un entramado de relaciones caracterizadas por miedos inseguridades y la aludida "dependencia" para la toma de decisiones.

41. De acuerdo con Alda Facio, Rosalía Granados y Ester Madrigal la violencia, en cualquiera de sus expresiones, debe ser vista en el contexto de desigualdad sustantiva y material. Analizada desde las causas reales de una sociedad patriarcal que hace aparecer a las mujeres como culpables/responsables de los hechos violentos[47]. Estas situaciones deben posibilitar la realización de un análisis objetivo desde las llamadas "cuestiones de género", considerando el "deber ser" impuesto por la sociedad de forma dicotómica en hombres y mujeres. Para ello habrán de considerarse los mitos, roles y estereotipos que agudizan la justificación de los hechos de violencia. Así por ejemplo las mujeres víctimas de violencia doméstica e intrafamiliar son vistas como quienes buscan los malos tratos, sea por masoquismo o porque les gusta ser golpeadas, sin que estos temas se aborden de manera especializada desde el "Ciclo de Violencia" o del "Síndrome de la Mujer Agredida"[48].

42. De este modo se presenta a los victimarios como los héroes del machismo, quienes deben poner orden en las relaciones familiares, y quienes establecen patrones de comportamiento para hombres y mujeres –el deber ser masculino y femenino–. Salirse del molde implica el rechazo social por apartarse de lo que se considera como bueno o aprobado desde las reglas vigentes de conducta social.

43. Un interesante ejercicio en función a dicho análisis en el tema que nos ocupa es la consideración de la libertad de expresión y sus límites. En ese contexto vemos el morbo de la sociedad ante hechos que muestran a las mujeres de un modo cosificado, sin considerar sus derechos como personas desde los distintos lugares que ellas ocupan y tampoco considerarlas como sujetos de derecho[49].

44. En otro terreno vemos cómo reaccionan los medios de prensa cuando las mujeres tratan de promover un cambio hacia el respeto de las personas en su dignidad e integridad, exhortando al ataque como medio de defensa. Una situación que revela claramente lo afirmado son las publicaciones que lanzan al mercado los diarios –generalmente la prensa amarilla– al ver en peligro sus ventas ante la posible promulgación de normas que en su caso vendrían a censurar la promoción de la violencia simbólica.

45. En el tipo de violencia que estamos analizando, la violencia simbólica, las personas victimarias son aquellas que detentan un poder económico y social, pues tienen la capacidad de difundir información y mantener a la sociedad de consumo como sostenedora de un sistema que muestra a las mujeres como objetos sexuales o comerciales, el contexto es bastante amplio desde las múltiples manifestaciones que pueden suscitarse.

46. Las asimetrías de poder con base en la división sexual androcéntrica se trasladan a los distintos ámbitos de la vida, predisponiendo las conductas de varones y mujeres en función a lo que el mundo espera de ellos y ellas. En las casas, en las calles, en las escuelas, en

---

[47] Al respecto ver Camacho Granados, Rosalía; Facio Montejo, Alda; y Serrano Madrigal, Ester. (1997). *Caminando hacia la Igualdad Real* – Manual en Módulos dirigidos a Facilitadoras(es) de Talleres para la Capacitación de Juezas(es) en la Administración de Justicia con Perspectiva de Género. Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delicuente (ILANUD) – Programa Mujer Justicia y Género, Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), Primera Edición, San José, Costa Rica.

[48] Facio Montejo, Alda. *Cuando el género suena cambios trae, Metodología para el análisis de género del fenómeno legal*. Programa Mujer, Justicia y Género, ILANUD. 1999. San José, Costa Rica.

[49] *Idém.,*

los lugares de trabajo, esa división sexual se traslada en función a los modelos requeridos por el entorno social.

47. Los usos y costumbres –prácticas– que legitiman las relaciones sociales de dominio y naturalizan las divisiones del mundo social entre las que se encuentran las de los sexos, circunscriben las acciones de mujeres al ámbito de lo privado por oposición a la de los hombres que se sitúan en el ámbito público. Según Bourdieu:

> "No se puede pensar de modo adecuado esta forma particular de dominio más que a condición de superar la alternativa ingenua de la contención y el consentimiento, de la coerción y la adhesión: la violencia simbólica impone una coerción que se instituye por medio del reconocimiento extorsionado que el dominado no puede dejar de prestar al dominante al no disponer, para pensarlo y pensarse, más que de instrumentos de conocimiento que tiene en común con él y que no son otra cosa que la forma incorporada de la relación de dominio[50]."

48. En este sentido, la Recomendación General 28 de la CEDAW insta a difundir mensajes en atención a lo dispuesto en la Convención, específicamente con base en el Art. 2°[51] de la misma. En el párrafo e) de la citada recomendación queda expresamente consignado que los Estados parte deben:

> "Conseguir la cooperación de todos los medios de comunicación en los programas de educación pública sobre la igualdad entre la mujer y el hombre y asegurarse en particular de que las mujeres conozcan su derecho a la igualdad sin discriminación, las medidas adoptadas por el Estado parten para aplicar la Convención y las observaciones finales del Comité sobre los informes presentados por el Estado parte[52]."

49. De esta manera el derecho a la educación también forma parte de la impronta que tienen los medios de comunicación. En este caso para el logro de la igualdad entre mujeres y hombres, mediante el conocimiento de sus derechos y la comprensión de las distintas formas de discriminación que pueden traducirse en acciones u omisiones, con la consecuente obligación de reparar por parte de los Estados.

50. La violencia simbólica está presente en todas las relaciones sociales y en todos los niveles, en los cuales existe la asimetría entre el dominador quien posee legitimidad, prestigio y autoridad y el dominado quien asume que el poder y quien lo tiene, no se cuestiona y se somete. Los espacios donde se presenta pueden ser el educativo, laboral, económico etc. y a través de instituciones como la familia, la escuela, la iglesia y los medios de comunicación se transmiten imágenes, mensajes, valores y normas que refuerzan los estereotipos de género y determinan los pensamientos, percepciones y acciones de las personas dentro del grupo social al que pertenecen.[53]

51. Por tanto, conocer la estructura de la simbolización nos permitirá desentrañar los procedimientos por medio de los cuales juzgamos las acciones de una mujer o de un hombre en función de su condición de género.

- **Igualdad y No Discriminación.**

52. Para este caso en específico, los derechos a la igualdad y a la no discriminación **son conceptos complementarios**. El primero tiene una connotación positiva, ya que trata de garantizar que todas las personas sean iguales en el goce y ejercicio de los derechos; mientras que el segundo tiene un sentido negativo debido a que supone la necesidad de que las personas no sean sujetas a distinciones arbitrarias e injustas[54]. La igualdad se

---

[50] Bordieu, *op. cit. La Dominación Masculina*.
[51] CEDAW: Artículo 2: *"Los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas, convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer…".*
[52] Véase, https://www.right-to-education.org/es/resource/cedaw-recomendaci-n-general-28
[53] Consejo Nacional de Población https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/312858/Prevenci_n_de_la_violencia__Violencia_simb_lica.pdf
[54] Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículos 1º y 24.

desprende directamente de la unidad de naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad esencial de la persona, frente a la cual es incompatible toda situación que, por considerar superior a un determinado grupo, conduzca a tratarlo con privilegio; o que, a la inversa, por considerarlo inferior, lo trate con hostilidad o de cualquier forma lo discrimine del goce de derechos que sí se reconocen a quienes no se consideran incursos en tal situación[55].

53. Se refiere a la igualdad ante la ley, la igualdad en la aplicación de la ley y la igualdad sustancial. Por su parte, el mandato de no discriminación tiene la finalidad y el objetivo de eliminar las desventajas y desigualdades que impiden el ejercicio y acceso efectivo a los derechos humanos; así como de generar las condiciones sociales y materiales necesarias para su realización, garantizando el derecho a la diferencia[56] a través de medidas de nivelación, inclusión y acciones afirmativas[57]. Al respecto, prohíbe toda forma de discriminación, formal o de facto, que atente contra la dignidad humana o tenga por objeto o resultado la negación, exclusión, distinción, menoscabo, impedimento o restricción de los derechos de las personas, grupos y comunidades, motivada por origen étnico o nacional, apariencia física, color de piel, lengua, género, edad, discapacidades, condición social, situación migratoria, condiciones de salud, embarazo, religión, opiniones, preferencia sexual, orientación sexual, identidad de género, expresión de género, características sexuales, estado civil o cualquier otra. También se considerará discriminación la misoginia, cualquier manifestación de xenofobia, segregación racial, antisemitismo, islamofobia, así como la discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia. La negación de ajustes razonables, proporcionales y objetivos, se considerará discriminación[58].

54. La igualdad, en el marco de los derechos humanos, se encuentra protegida como derecho a nivel internacional, estableciéndose además la obligación por parte de los poderes públicos de promoverlos, así como de asumir íntegramente el deber que les corresponde. Naciones Unidas ha sido en el devenir de los años prolija en cuanto a los documentos que dan cuerpo a los derechos humanos de las mujeres[59].

- **Lenguaje sexista**

55. La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres señala como obligación para todo el sector público el uso de lenguaje no sexista, incluyente y libre de estereotipos de género.

56. Sobre el tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha señalado que, las manifestaciones sobre grupos considerados en situación de vulnerabilidad, como es el caso de las mujeres, adquieren una protección intensificada al honor, ante lo cual, el lenguaje que se utiliza para ofender o descalificar a las mismas, adquiere la calificativa de discriminatorio, al destacar expresiones lingüísticas que denotan rechazo social. Asimismo, considera que el lenguaje discriminatorio constituye una categoría de expresiones ofensivas u oprobiosas, que, al ser impertinentes en un mensaje determinado, actualizan las formas de expresión absolutamente vejatorias.

57. Sumado a esto, el Máximo tribunal del país, ha señalado en el criterio “**LIBERTAD DE EXPRESIÓN. EL LENGUAJE DISCRIMINATORIO SE CARACTERIZA POR DESTACAR CATEGORÍAS DE LAS SEÑALADAS EN EL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, MEDIANTE ELECCIONES**

---

[55] *Véanse* Corte idh, Propuesta de Modificación a la Constitución Política de Costa Rica Relacionada con la Naturalización, Opinión Consultiva OC-4/84 del 19 de enero de 1984, serie A, núm. 4, párr. 55; y Corte idh, *Caso Espinoza Gonzáles* vs. *Perú (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas)*, Sentencia del 20 de noviembre de 2014, serie C, núm. 289, párr. 216.
[56] Anne F. Bayefsky, “El principio de igualdad y no discriminación en el derecho internacional”, en *Human Rights Law Journal*, vol. 11, núm. 1-2, 1999, pp. 1-34.
[57] Constitución Política de la Ciudad de México, artículo 4º, apartado C.
[58] *Ibidem*, artículo 4º, apartado C, numeral 2.
[59] La Convención sobre la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer (CEDAW), la Declaración de Viena (1993), la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de El Cairo (1994), su Programa de Acción Mundial y más adelante la sesión de la Asamblea Cairo, la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer de Beijing (1995) y su Plataforma de Acción Mundial, la Declaración del Milenio (2000) y las diversas Resoluciones del Comité CEDAW.

LINGÜÍSTICAS QUE DENOTAN UN RECHAZO SOCIAL,”[60] que, “[e]l respeto al honor de las personas, como límite al ejercicio de la libertad de expresión cuando las manifestaciones se refieran a grupos sociales determinados, alcanza un mayor estándar de protección cuando las mismas se refieran a colectividades que por rasgos dominantes históricos, sociológicos, étnicos o religiosos, han sido ofendidos a título colectivo por el resto de la comunidad.”[61]

58. Precisando que, “esta protección al honor de los grupos sociales se intensifica cuando en una sociedad determinada ha existido un constante rechazo a las personas que los integran, ante lo cual, el lenguaje que se utilice para ofender o descalificar a las mismas adquiere la calificativa de discriminatorio. En consecuencia, el lenguaje discriminatorio se caracteriza por destacar categorías de las señaladas en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante elecciones lingüísticas que denotan un rechazo social, en torno a aspectos tales como el origen étnico o nacional, el género, las discapacidades, la condición social, la religión y las preferencias sexuales. Debido a lo anterior, el lenguaje discriminatorio constituye una categoría de expresiones ofensivas u oprobiosas, las cuales, al ser impertinentes en un mensaje determinado, actualizan la presencia de expresiones absolutamente vejatorias.”[62]

59. Asimismo, en el criterio denominado “**LIBERTAD DE EXPRESIÓN. RELACIÓN ENTRE EL LENGUAJE DOMINANTE EN UNA SOCIEDAD Y LA CONSTRUCCIÓN DE ESTEREOTIPOS**”[63], en el cual, se establece que, “[l]a relación entre lenguaje y la identidad de las personas conlleva una mezcla compleja de factores individuales, sociales y políticos que permite que las mismas se consideren miembros de una colectividad o se sientan excluidas de ésta. Así, donde existen conflictos sociales, y en particular reivindicaciones colectivas, el uso del lenguaje puede permitir la eliminación de prácticas de exclusión y estigmatización. Tal lenguaje influye en la percepción que las personas tienen de la realidad, provocando que los prejuicios sociales, mismos que sirven de base para las prácticas de exclusión, se arraiguen en la sociedad mediante expresiones que predisponen la marginación de ciertos individuos.”[64]

60. De ahí que, “[l]as percepciones o las imágenes que tenemos de ciertos grupos influyen de forma definitiva en nuestras expectativas hacia ellos, así como en nuestros juicios y en nuestro comportamiento. Así, la representación de "normalidad" con la cual una sociedad habla sobre algo o lo simboliza se le conoce como discurso dominante, mismo que se caracteriza por la construcción de un conjunto más o menos estructurado de creencias en relación a los miembros de un grupo, a lo cual se le denomina como estereotipo. Así, los estereotipos contienen explícita o implícitamente juicios de valor negativos sobre los integrantes de un grupo social determinado, ante lo cual se convierten en instrumentos para descalificar y, en última instancia, para justificar acciones y sucesos en su contra.”[65]

61. De acuerdo con el estudio realizado por el Instituto Nacional de las Mujeres intitulado "Roles y Estereotipos de Género, una Forma de Discriminación Contra las Mujeres", los estereotipos son patrones culturales arraigados que se reproducen entre generaciones. Con ellos se educa a niñas y niños, desde que nacen, tanto en la familia, como en la escuela; esto también se ve reflejado en cada comunidad, en los medios de comunicación y en el uso del lenguaje. En todos estos ámbitos se remarca con insistencia lo que deben ser y hacer las mujeres y los hombres. En efecto, la literatura especializada señala que entre los seres humanos el lenguaje habilita y crea vida social. A través del lenguaje se ve reflejado el modelo de sociedad existente en un determinado lugar y en un periodo histórico específico. Ninguna sociedad vive al margen de su lenguaje sino más bien existe en él.

---

60 Tesis: 1a. CXLVII/2013 (10a.), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Mayo de 2013, T. 1, pág. 549 y registro 2003629.
61 Ídem.
62 Ídem.
63 Tesis: 1a. CXXXIII/2015 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Abril de 2015, T. I, pág. 516 y de registro 2008939.
64 Ídem.
65 Ídem.

62. De allí que todas las posibilidades de acciones y coordinaciones posibles entre los seres humanos estén registradas en el lenguaje y, por tanto, den cuenta de la realidad en que están viviendo los hombres y las mujeres de una determinada cultura. A la vez, el lenguaje también genera realidad en tanto constituye la principal forma de relacionarse con otros(as) y de coordinar acciones para la convivencia entre unos(as) y otros(as).

63. Derivado de la obligación de respetar, proteger y prevenir violaciones a los derechos humanos establecida en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las autoridades, en el marco de sus funciones, deben ser especialmente cuidadosos a fin de no institucionalizar la discriminación contra las mujeres basada en los estereotipos sobre roles sexuales y, con ello, perpetuar la violencia en contra de éstas, pues se ha identificado que ésta es una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres, que conducen a obstaculizar el pleno desarrollo de éstas.

64. En la Guía para el Uso de un Lenguaje Incluyente y No Sexista, publicada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se estableció un glosario básico de palabras, como lenguaje[66], sexismo[67], sexismo en el lenguaje[68], lenguaje incluyente[69], lenguaje no sexista[70], entre otros.

65. Se debe eliminar todo tipo de expresiones y palabras que ofenden o discriminan a las personas; que reproducen estereotipos de género; o minimizan y frivolizan la violencia contra las mujeres.

66. Los estereotipos sexistas, están demasiado banalizados y tolerados, en nombre de la libertad de expresión. Además, estos estereotipos sutilmente vinculados a las medidas, que reproducen las actitudes y las opiniones percibidas como la norma por la sociedad, donde la igualdad de género está muy lejos de ser una realidad. De hecho, muchas veces, los estereotipos sexistas no pueden ser atacados judicialmente o sancionados por las instancias, excepto los casos muy graves de violación de la dignidad humana.

67. Las percepciones o las imágenes que tenemos de ciertos grupos influyen de forma definitiva en nuestras expectativas hacia ellos, así como en nuestros juicios y en nuestro comportamiento. Así, la representación de "normalidad" con la cual una sociedad habla sobre algo o lo simboliza se le conoce como discurso dominante, mismo que se caracteriza por la construcción de un conjunto más o menos estructurado de creencias en relación a los miembros de un grupo, a lo cual se le denomina como estereotipo. Así, los estereotipos contienen explícita o implícitamente juicios de valor negativos sobre los integrantes de un grupo social determinado, ante lo cual se convierten en instrumentos para descalificar y, en última instancia, para justificar acciones y sucesos en su contra.

68. En atención a las disposiciones y estándares señalados anteriormente, esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, procede a realizar el análisis del caso planteado por **VD**, con motivo de las expresiones hechas por el Licenciado **AR**, Diputado de la Sexagésima Tercera Legislatura de esta misma entidad federativa.

69. Los agravios expuestos por **VD**, se hacen consistir en que el [...], el Diputado **AR**, integrante de la Sexagésima Tercera Legislatura del Estado de Zacatecas, realizó, en sesión de la […] de la Asamblea Legislativa, públicamente la siguiente manifestación: *"[…]"*

---

[66] Lenguaje. Sistema de comunicación con dos posibles funciones: reproducir o transformar la realidad. Esto es, por medio del lenguaje se puede contribuir a un cambio cultural en favor de la igualdad.
[67] Sexismo. Forma de discriminación de un sexo por considerarlo inferior al otro. Tanto los hombres como las mujeres pueden hacer uso de comportamientos sexistas, sin embargo, el sexo tradicionalmente discriminado es el femenino.
[68] Sexismo en el lenguaje. Forma de discriminación indirecta de impacto intangible que daña la dignidad de las personas. Es importante recordar que el lenguaje no es en sí mismo sexista o excluyente sino el uso que se le da.
[69] Lenguaje incluyente. Hace referencia a toda expresión verbal o escrita que utiliza vocabulario neutro, o bien, hace evidente lo femenino y masculino. Visibiliza a grupos de población poco reconocidos, discriminados o excluidos. También evita generalizaciones del masculino para situaciones y actividades donde aparecen mujeres y hombres.
[70] Lenguaje no sexista. Evita frases, mensajes o expresiones que invisibilizan, humillan, ofenden, subordinan, discriminan o violentan a las personas, en particular a las mujeres, quienes han sido tradicionalmente objeto del sexismo.

70. Aseveró que los comentarios esgrimidos por el Diputado **AR,** en la sesión de la […] de la Asamblea Legislativa, llevada a cabo el [...], le violentaron sus derechos humanos.

71. Este Organismo protector de los Derechos Humanos advierte que las circunstancias de los hechos denunciados por **VD**, son las siguientes: por cuanto al tiempo: [...], mientras se desahogaba la sesión de la […] de la Asamblea de la Sexagésima Tercera Legislatura del Estado de Zacatecas; respecto al lugar: la sala de sesiones del Congreso del Estado; persona: **AR**, diputado.

72. Las manifestaciones a que hace referencia la quejosa, quedaron grabadas en la sesión de la […] de la Asamblea Legislativa de la Sexagésima Tercera Legislatura del Estado de Zacatecas, llevada a cabo el [...], de lo cual obra video publicado en la página del Congreso del Estado […], y su versión escrita publicada en […], concretamente la que corresponde a la fecha en cita, la cual se advierte en la siguiente liga: […].

73. De los citados documentos electrónicos, mismos que, por ser documentales públicas adquieren valor probatorio pleno, se desprende que la sesión de la […] de la Honorable Sexagésima Tercera Legislatura del Estado, fue celebrada el día [...], a partir de las […] a las horas, dentro del […], correspondiente al Primer Año de su Ejercicio Constitucional; en el desarrollo de la misma, se pasó lista de asistencia, sin que se encontrara presente, hasta ese momento el Licenciado **AR**, luego de la existencia de Quórum Legal para sesionar, se dio inicio a la sesión de la […], se puso a consideración el orden del día con […] puntos, el cual fue aprobado por unanimidad y se prosiguió al desarrollo del mismo. Posteriormente, al transcurrir el minuto […] de la sesión, el Diputado **AR** solicitó se registrara su asistencia.

74. En el punto de Asuntos Generales de la sesión de la […] de la Asamblea Legislativa de la Sexagésima Tercera Legislatura del Estado de Zacatecas, se registraron la Diputada **[…]** con el tema: “[…]”, el Diputado **[…]** con el tema: “[…]” y, la Diputada **[…]**, con el tema “[…]”. La participación del Diputado **[…],** inició en el minuto […] y concluyó en el minuto […]; enseguida el […], expresó: “[…]”; luego, al minuto […] el Diputado **AR** solicitó el uso de la voz “[…]”, y el Diputado […], en el minuto […] señaló “[…]”, dirigiéndose al Diputado **[…]**; enseguida manifestó: “[…]”, dirigiéndose al Diputado **AR**, quien hizo uso de la palabra en el minuto […], y concluyó su intervención en el minuto […] de la citada sesión.

75. Desde […], una vez concedido el uso de la voz, el Diputado **AR,** expresó dentro del lapso de tiempo comprendido dentro de […] a […] del tiempo de desarrollo de la sesión, lo siguiente: *“[…].”*

76. Con lo que queda claro que la participación que **AR** tuvo en la sesión de [...], fue en su calidad de Diputado, por lo cual, lo que se haya pronunciado en esa sesión, en el ámbito político que le incumbe, se encuentra salvaguardado con la inmunidad legislativa que le asiste.

77. Empero, lo que escapa a esa inmunidad parlamentaria, es el hecho de que, durante su participación “[…]” en la sesión de [...], realizó manifestaciones sexistas en contra de la aquí quejosa **VD**, al cuestionarle situaciones de su ámbito laboral y referirse hacía ella como “*[…]”*, en virtud a que en ese momento era [...] del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, expresión que en el contexto que fue utilizada, sí tenía una connotación de ridiculización y desprestigio respecto de **VD,** lo que se traduce en violencia simbólica.

78. Concretamente, la expresión atribuible al Diputado **AR**, y que queda debidamente acreditada con las grabaciones y versiones escritas del propio Poder Legislativo, las cuales constituyen documentales públicas, y por la cual se emite el presente instrumento, es aquella que contiene elementos de género y denostaciones de carácter sexual, pues se refirió hacia **VD** como “[…]”, lo que resulta claro, para este Organismo, que con la citada expresión, se denigra a la quejosa en su calidad de mujer.

79. Una de las formas más sutiles de transmitir la discriminación contra las mujeres es a través de la lengua, ya que ésta no es más que el reflejo de los valores, del pensamiento,

de la sociedad que la crea y utiliza. Nada de lo que decimos en cada momento de nuestra vida es neutro: todas las palabras tienen una lectura de género. Así, la lengua no sólo refleja, sino que también transmite y refuerza los estereotipos y roles considerados adecuados para mujeres y hombres en una sociedad.[71]

80. Existe un uso sexista de la lengua en la expresión oral y escrita (en las conversaciones informales y en los documentos oficiales) que transmite y refuerza las relaciones asimétricas, jerárquicas e inequitativas que se dan entre los sexos en cada sociedad y que es utilizado en todos los ámbitos de la misma.[72]

81. La lengua es un hecho tan cotidiano que lo asumimos como natural, siendo pocas las veces que nos detenemos a preguntarnos el alcance y la importancia de la misma. En este sentido, señala Edward Sapir, que "sólo hace falta un momento de reflexión para convencernos de que esta naturalidad de la lengua es una impresión ilusoria". Y es que el lenguaje no es algo natural, sino una construcción social e histórica, que varía de una cultura a otra, que se aprende y se enseña, que conforma nuestra manera de pensar y de percibir la realidad, el mundo que nos rodea, y lo más importante, que se puede modificar.[73]

82. A través del lenguaje aprendemos a nombrar el mundo en función de los valores imperantes de la sociedad. Las palabras denominan las cosas, los valores, los sentimientos, las diferencias; asimismo, aprenderá muchas diferencias que están en función del sexo y también, la jerarquización de las mismas. Y es que la lengua, al ser el reflejo de la sociedad que la utiliza, transmite la ideología imperante en la misma, pues refleja y refuerza las desigualdades derivadas de la discriminación ejercida hacia las mujeres a través del androcentrismo y del sexismo.

83. Según Teresa Meana "el androcentrismo es el enfoque en las investigaciones y estudios desde una única perspectiva: la del sexo masculino". Supone, según esta autora, "considerar a los hombres como el centro y la medida de todas las cosas. Los hombres son considerados, así, el sujeto de referencia y las mujeres seres dependientes y subordinados a ellos". Entonces, el androcentrismo se manifiesta gracias a la desigualdad en el orden de las palabras, en el contenido semántico de ciertos vocablos.

84. Por su parte, el sexismo es "la discriminación de personas de un sexo por considerarlo inferior al otro", siendo las mujeres, el sexo tradicionalmente discriminado. Para Teresa Meana el sexismo "es la asignación de valores, capacidades y roles diferentes a hombres y mujeres, exclusivamente en función de su sexo, desvalorizando todo lo que hacen las mujeres frente a lo que hacen los hombres que es lo que está bien, –lo que tiene importancia–".

85. En el Manual para el uso no sexista del lenguaje, editado por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), se plasman diversidad de ejemplos de lenguaje sexista, por citar algunos: "Vieja, el último" o "Calladita, te ves más bonita".

86. Entonces, al dirigirse hacia la quejosa **VD**, en el sentido de que ella actuaba al interior del Poder Legislativo con calidad de "*[…]",* queda claro que la expresión proferida por el Diputado **AR**, tiene una connotación de lenguaje sexista de género, lo que implica un mensaje discriminatorio que alude a estereotipos de género, el cual atenta directamente contra las mujeres y cuestionan su autonomía, dignidad y capacidad, vulnerando con ello el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, particularmente a la violencia simbólica de género.

87. La expresión que se analiza, deja en claro que prevalece la dominación masculina, la cual convierte a las mujeres en objetos simbólicos, de ahí que resulte importante erradicar

---

[71] Para la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), Manual para el uso no sexista del lenguaje, página 7.
[72] Ídem
[73] Ídem, página 16

cualquier tipo y modalidad de violencia contra las mujeres, como es el caso de la violencia simbólica. Para ello, es necesario, dejar de concebir a las mujeres como objetos, para reconocerlas como sujetas de derecho y desnaturalizar los espacios donde se legitima la diferencia como desigualdad.

88. Entonces, una de las premisas necesarias para alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres, es erradicar el sexismo de nuestro lenguaje. Asimismo, eliminar las prácticas y actitudes que promueven el trato diferenciado de las personas en razón de su sexo biológico, del cual se asumen características y comportamientos que se espera, de las mujeres y los hombres, pues las prácticas sexistas afectan principalmente a las mujeres dada la vigencia de creencias culturales que las consideran inferiores o desiguales a los hombres por naturaleza.

89. Otro motivo de inconformidad de la quejosa **VD**, fue que, al momento en que el Diputado **AR,** tomó el uso de la voz en la sesión de la Asamblea de la Legislatura para realizar las expresiones analizadas en los párrafos precedentes, ella se encontraba en […] de la Legislatura, conjuntamente con algunos compañeros […] y dos personas más de sexo masculino […].

90. Por su parte, el Diputado **AR**, al momento de rendir su informe, refirió no serle hechos propios.

91. Respecto a la inconformidad expuesta por **VD**, consistente en que, sin su autorización fue grabada, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido diversos criterios que el derecho a la propia imagen es personalísimo, y únicamente faculta a su titular a decidir en forma libre, sobre la manera en que elige mostrarse frente a los demás y, por consiguiente, se configura, junto con otros también personalísimos (a la intimidad y a la identidad personal y sexual), como un derecho de defensa y garantía esencial para la condición humana.

92. En ese mismo tenor se ha pronunciado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al resolver el caso Fontevecchia y D'Amico vs. Argentina (Fondo, Reparaciones y Costas), sentencia de 29 de noviembre de 2011, párrafo 67, pues sostuvo que aunque el derecho a la propia imagen no se encuentra expresamente enunciado en el artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, las imágenes o fotografías personales están incluidas dentro del ámbito de protección de la vida privada, y que la fotografía es una forma de expresión que recae en el ámbito de protección del artículo 13 de la propia convención.

93. De las pruebas aportadas por la quejosa **VD**, consistentes en […], con duración de […] minutos, de los cuales obra constancia en el expediente de queja, se acredita que, efectivamente, mientras el Diputado **AR** se encontraba con el uso de la palabra en la sesión de la […] de la Sexagésima Tercera Legislatura del Estado, […].

94. Del acta circunstanciada recabada por personal adscrito a esta Comisión, con motivo de la inspección realizada en la […], básicamente se acredita que una cámara de videograbación enfocaba […].

95. Sin embargo, del análisis de dicha grabación, así como de las constancias que integran el expediente de queja, no se desprende constancia alguna que haga presumir ni siquiera indiciariamente quién o a solicitud de quién, se realizó la […], por lo que este hecho no puede atribuirse al Diputado **AR,** quien, además, negó categóricamente lo aseverado.

96. En ese contexto, analizados que fueron los datos, debe decirse que los mismos resultan insuficientes para acreditar la afectación a la propia imagen, referida por la quejosa; pero, sobre todo, porque conforme lo establece el párrafo segundo, del artículo 49, de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, no se cuenta con ningún medio de convicción contundente, pues nos encontramos ante versiones opuestas entre sí.

97. Señalado lo anterior, este Organismo advierte que no cuenta con pruebas suficientes, para determinar la responsabilidad que se le atribuye al Diputado **AR**. De ahí que, en lo que a este aspecto se refiere, sea procedente dictar el presente Acuerdo de Terminación de queja por insuficiencia de pruebas para acreditar la violación a los derechos humanos.

IX. CONCLUSIONES DEL CASO:

Luego de hacer un estudio holístico de la evidencia recabada, los hechos probados y considerando los estándares señalados en el apartado anterior, esta Comisión concluye que en el presente caso lo siguiente:

1. Se acreditó que la expresión proferida por el Diputado **AR**, hacia la quejosa, tiene una connotación de lenguaje sexista de género, que lleva implícito un mensaje discriminatorio que alude a estereotipos de género, el cual atenta directamente contra las mujeres y cuestionan su autonomía, dignidad y capacidad, vulnerando con ello el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, particularmente a la violencia simbólica de género.

2. El componente de género que, para este caso se toma en consideración, es la carga negativa de un comentario que denigra a la quejosa. El Diputado colocó a la quejosa en una situación de desprestigio y aludió a que ésta, en su cargo como funcionaria del Poder Legislativo del Estado, colaboraba con el […].

3. El Diputado a través del lenguaje emitió comentarios de carácter sexista en contra de la quejosa, vinculando estos al desempeño de su cargo como funcionara en el órgano legislativo estatal, conceptos como estos no debieran ser parte de su vocabulario ordinario.

4. Desafortunadamente, la violencia simbólica al no estar contemplada de forma expresa en las manifestaciones de violencia previstas en las leyes especializadas, suele invisibilizarse, por tanto, es necesario llevar a cabo una interpretación mucho más exhaustiva con el ánimo de explorar todos aquellos contextos de relación en las que pudiera reproducirse contenidos violatorios a los derechos humanos de las mujeres.

5. Sin duda, el desconocimiento por parte del servidor público no le exime de responsabilizarse sobre los comentarios que realiza y mucho menos cuando estos atienden a la esfera personal de una funcionaria del Poder Legislativo del Estado y ciudadana, sobre todo cuando este mensaje es retomado por la población en general, creando un ambiente de hostilidad y rechazo hacia la representación de las mujeres en espacios públicos.

6. Las acciones que perpetúan y normalizan las expresiones de violencia contra las mujeres por razones de género impiden el pleno desarrollo de las personas que las padecen. El Estado tiene el deber de promover conductas que minimicen las brechas entre los sexos con el propósito de construir relaciones de poder mucho más igualitarias que promuevan la no discriminación.

X. REPARACIONES.

1. De conformidad con lo establecido en los artículos 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 51 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, al acreditarse violación a los derechos humanos de **VD**, atribuible a un funcionario de la Legislatura del estado de Zacatecas, la Recomendación formulada al respecto, debe incluir las medidas que procedan para lograr la efectiva restitución de la quejosa afectada en sus derechos.

2. Dicha reparación, de conformidad con los Principios y Directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, adoptada por la Asamblea General de las

Naciones Unidas el 16 de diciembre de 2005, las violaciones de derechos humanos deben contemplar, de forma apropiada y proporcional a la gravedad de ésta, una reparación plena y efectiva en las formas siguientes: restitución, rehabilitación, satisfacción, indemnización, deber de investigar y garantías de no repetición. Las reparaciones se encuentran también en la Ley General de Víctimas, en sus artículos 1, último párrafo, 7, fracción I y II, y particularmente en el texto legal del artículo 26, que establece que "Las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera oportuna, plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva por el daño que han sufrido como consecuencia del delito o hecho victimizante que las ha afectado o de las violaciones de derechos humanos que han sufrido, comprendiendo medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y medidas de no repetición"; además, por lo previsto en el artículo 27 del mismo ordenamiento legal.

Modalidades de la reparación del daño. La reparación del daño comprende diversas modalidades en las que se puede materializar:

A) De la indemnización.

1. La indemnización es una medida compensatoria que busca reparar los perjuicios económicamente evaluables que sean consecuencia de las violaciones a derechos humanos, entre los que se incluyen: el daño físico o mental; la pérdida de oportunidades, en particular las de empleo, educación y prestaciones sociales; los daños materiales y la pérdida de ingresos, incluido el lucro cesante; los perjuicios morales; los gastos de asistencia jurídica o de expertos, medicamentos y servicios médicos, psicológicos y sociales[74].

2. En razón a lo anterior, en términos de los artículos 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 26, 27, 40, 41, 42, 54, 58, 59, y demás aplicables de la Ley de Atención a Víctimas del Estado de Zacatecas, y toda vez que se acreditaron violaciones a los derechos humanos de **VD,** la Comisión Ejecutiva de Atención Integral a Víctimas del Estado, deberá realizar su inscripción, en su calidad de víctima directa, en el Registro Estatal de Víctimas, a fin de que tenga acceso a los servicios y en su caso, al Fondo de Atención previsto en dicha Ley.

B) De las medidas de rehabilitación.

1. Las medidas de rehabilitación buscan reducir los padecimientos físicos y psicológicos de las víctimas, a través del otorgamiento de servicios de atención médica, psicológica, jurídica y social que éstas requieran[75].

2. En ese sentido, según la violación a derechos humanos acreditada en el presente instrumento, se deberá valorar y determinar si **VD,** como víctima directa, requiere de atención psicológica especializada, derivado de las posibles afectaciones presentadas a raíz de los hechos materia de la presente Recomendación. Y, de ser el caso, y así lo decida la agraviada, se realice el tratamiento psicológico necesario para su total restablecimiento. Asimismo, a fin de evitar que ésta sea objeto de una revictimización, debe garantizarse que dicho tratamiento sea efectivamente especializado y que considere las características de edad y género de la víctima.

C) De las medidas de satisfacción.

1. Respecto a este concepto, de conformidad con lo establecido por los Principios sobre el derecho a obtener reparaciones, ésta debe incluir, cuando sea el caso, la totalidad o parte de las medidas siguientes: medidas eficaces para conseguir que no se continúe con las violaciones; así como la aplicación de sanciones judiciales o administrativas a los responsables de las violaciones.[76]

---

74. Numeral 20 de los *Principios y Directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones,* Asamblea General de las Naciones Unidas, 16 de diciembre de 2005.
75. Ibíd., Numeral 21.
[76] Ibídem, párr. 22.

2. Por lo cual, el Diputado **AR**, deberá emitir una disculpa pública, con el compromiso ético y jurídico de desempeñar sus funciones en un marco de respeto a los derechos humanos, con el objetivo de evitar cualquier transgresión como la que se acreditó en la presente Recomendación, es decir, en el ámbito de los derechos de las mujeres a vivir libres de violencia, particularmente, por lo que hace a la violencia simbólica.

D) De las garantías de no repetición.
1. Son aquellas que se adaptan con el fin de evitar que las víctimas vuelvan a hacer objeto de violaciones a sus derechos humanos y para contribuir a prevenir o evitar la repetición de actos de su misma naturaleza.

2. Asimismo el Diputado **AR**, deberá llevar a cabo un curso de formación en temas de derechos humanos de las mujeres, específicamente en lo que se refiere al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia; perspectiva de género; igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, así como de Género, Masculinidades y uso de lenguaje incluyente y no sexista.

XI. RECOMENDACIONES.

Por lo anterior, y con fundamento en los 1 y 102 apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 2, 3, 4, 8, 17, 37, 51, 53, 54, 56, 57 y 58 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas se emiten las siguientes Recomendaciones:

PRIMERA. En el plazo máximo de un mes, contado a partir de la notificación de la presente Recomendación, se inscriba en el Registro Estatal de Víctimas a **VD**, como víctima directa de violación a su derecho a vivir una vida libre de violencia, para garantizar que, en su caso, tengan acceso oportuno y efectivo al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, conforme a la Ley de Atención a Víctimas del Estado de Zacatecas.

SEGUNDA. Dentro del plazo máximo de un mes, contado a partir de la aceptación de esta Recomendación, se valore y determine si la víctima directa requiere de atención psicológica, relacionada con la vulneración a sus derechos humanos. Y, de ser el caso, en un plazo de un mes, posteriores a la realización de dicha valoración, se realicen las gestiones necesarias para que, en caso de que así lo decida la agraviada, inicie su tratamiento, hasta el total restablecimiento de su salud mental.

TERCERA. Dentro del plazo máximo de un mes, contados a partir de la aceptación de esta Recomendación, se emita por parte del Diputado **AR**, una disculpa pública, en la que asuma el compromiso ético y jurídico de desempeñar sus funciones dentro del marco de respeto a los derechos humanos, con el objetivo de evitar cualquier transgresión como la que se acreditó en la presente Recomendación, es decir, en el ámbito de los derechos de las mujeres a vivir libres de violencia, particularmente, por lo que hace a la violencia simbólica.

CUARTA. Dentro de un plazo máximo de tres meses, contados a partir de la aceptación de la presente Recomendación, se capacite al Diputado **AR** en temas relativos a la protección y respeto a los derechos humanos, específicamente en lo que se refiere al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia; perspectiva de género; igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, así como de Género, Masculinidades y uso de lenguaje incluyente y no sexista.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 53, párrafo segundo de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, se hace del conocimiento de la autoridad a la que va dirigida esta Recomendación, que dispone de un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente en que ésta se le notifique, para que manifieste si la acepta o no, en el entendido de no aceptarla, su respuesta se hará del conocimiento de la opinión pública. En caso de que la acepte, se le notifica que dispone de un plazo de 15 días, contados a partir del vencimiento del término del que disponía para responder sobre la aceptación, a fin de enviar las pruebas de su cumplimiento.

Por último, hágasele saber a la quejosa que, de conformidad con el artículo 61 de la Ley de este Organismo, dispone de 30 días naturales, computados a partir de la fecha de notificación del presente documento, para que en caso de que exista inconformidad con la misma, interponga el recurso de impugnación correspondiente ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Así lo determina y firma

_____

DRA. EN D. MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOS
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO

c.c.p.- Licenciado Valente Cabrera Hernández, Titular de la Comisión Ejecutiva de Atención Integral a Víctimas de Zacatecas. Para su conocimiento e inicio del expediente correspondiente.
c.c.p.- Dra. en D. H. Argelia Alejandra Rodríguez Ayala, Coordinadora General de Asuntos Jurídicos, para su conocimiento.
c.c.p.- Minutario.

Expediente: CDHEZ/096/2021

Persona quejosa: **Q**.

Persona agraviada: VD.

Autoridad Responsable: Personal de Seguridad y Custodia del Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas

Derechos Humanos vulnerados:

I. Derecho a la integridad personal, en su modalidad de integridad física, en relación con el deber del Estado garante de las personas privadas de su libertad.
II. Derecho a la alimentación en relación con el deber del Estado garante de las personas privadas de su libertad.

Zacatecas, Zacatecas, a 26 de agosto de 2021, una vez concluida la investigación de los hechos que motivaron el expediente CDHEZ/096/2021,y analizado el proyecto presentado por la Sexta Visitaduría, la suscrita aprobó, de conformidad con los artículos 4, 8 fracción VIII, 17 fracción V, 37, 51 y 56 de la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, en relación con lo dispuesto por los numerales 161, fracciones X, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 y 175 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, la **Recomendación 43/2021** que se dirige a la autoridad siguiente:

Maestro **ARTURO LÓPEZ BAZÁN**, Secretario de Seguridad Pública de Zacatecas.

I. DE LA CONFIDENCIALIDAD

1. De conformidad con los artículos 6°, apartado A, fracción II y 16, apartado A, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 23 y 85 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, los datos personales de los peticionarios y agraviados que así lo soliciten, relacionadas con esta resolución, permanecerán confidenciales, ya que éstos no son públicos.

II. RELATORÍA DE LOS HECHOS Y OBJETO DE LA CONTROVERSIA.

1. El 03 de marzo de 2021, **Q** presentó, de conformidad con los artículos 30, 31 y 32 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, formal queja por presuntas violaciones a los derechos humanos de **VD**, por actos atribuibles al personal de seguridad y custodia del Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas.

Por razón de turno, el 03 de marzo de 2021, se remitió la queja a la Sexta Visitaduría, bajo el número de expediente citado al rubro, a efecto de formular acuerdo de calificación de ésta, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 123 y 124 fracción I del Reglamento de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas.

En misma fecha, 03 de marzo de 2021, se determinó calificar de pendiente la queja con la finalidad de que acudiera a este Organismo, el agraviado y precisara hechos de la queja, de conformidad con el artículo 32 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, en relación con el numeral 124, fracción III del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas.

Una vez subsanado lo anterior, el 09 de marzo de 2021, la queja se calificó como presunta violación al derecho a la integridad personal, en su modalidad de integridad física, en relación con el deber del Estado garante de las personas privadas de su libertad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 124 fracción I, del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas.

2. Los hechos materia de la queja consistieron en lo siguiente:
Refirió la quejosa **Q**, que su hermano **VD**, fue trasladado al Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas y que, al salir, estaba golpeado, ya que presentaba lesiones en su cabeza y espalda, refiriendo su hermano que lo habían agredido los elementos de seguridad y custodia del citado Centro.

Por su parte, el directamente agraviado, afirmó que un domingo se encontraba a bordo de un vehículo de motor, cuando elementos de seguridad pública se acercaron a él para cuestionarle qué estaba haciendo, luego de identificarse, corroboraron que tenía girada una orden de aprehensión, por lo cual fue trasladado a la Fiscalía General de Justicia, en donde permaneció aproximadamente 3 horas, para luego ser trasladado al Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas, en donde le tomaron fotografías de ingreso; posteriormente, fue trasladado a una celda en donde pasó la noche. Refiere que, a la mañana siguiente, lunes, les tocó la puerta, pues no había recibido alimento desde su detención, haciéndolo nuevamente una hora más tarde. Sin embargo, un oficial abrió la ventana y le tiró un golpe a la cara, diciéndole que no estuviera pateando la puerta, al referirle el agraviado que él no estaba pateando la puerta, se enojó y entró a la celda y lo golpeó, mientras le pedía que revisara las cámaras para que viera que no estuvo golpeando la puerta, momento en el que llegaron alrededor de 4 o 5 elementos más, quienes también lo agredieron físicamente, propinándole patadas hasta tumbarlo al piso, en donde continuaron los golpes.

Afirmó el agraviado que, tanto a su entrada como a su salida, fue revisado por un médico, quien le tomó fotografías; luego, que ese mismo día, entre las 12:00 y las 13:00 horas, salió en libertad, en virtud de que se había celebrado una audiencia ante el Juez, y se llegó a un acuerdo reparatorio. Finalmente, afirmó que uno de los elementos lo amenazó de muerte si los demandaba.

3. El 30 de marzo de 2021, el Comisario **SP1**, Director del Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas, presentó su informe de autoridad.

III. COMPETENCIA.

1. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas es competente, en los términos de los artículos 1º, 4º, 6º, 8º fracción VII, inciso A) de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, en relación con los numerales 15, 16 y 17 de su Reglamento Interno, en razón de que la queja se promueve en contra de personal de seguridad y custodia del Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas.

2. De conformidad con los artículos 123 y 124 fracción I, del Reglamento Interior de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, este Organismo advierte que, de los hechos materia de queja, se pudo presumir la violación de los derechos humanos de **VD,** y la responsabilidad por parte del personal de seguridad y custodia del Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas.

3. Esta Comisión presumió la violación de los siguientes derechos:
a) Derecho a la integridad personal, en su modalidad de integridad física, en relación con el deber del Estado garante de las personas privadas de su libertad.

IV. PROCEDIMIENTO ANTE LA COMISIÓN.

Con la finalidad de documentar las presuntas violaciones a derechos humanos, así como para determinar la existencia o no de responsabilidad por parte de los servidores públicos señalados, este Organismo realizó entrevistas a las personas relacionadas con los hechos; se recabaron comparecencias de personal adscrito al Centro Regional de Reinserción Social de Varonil de Cieneguillas, Zacatecas; se solicitaron informes a las autoridades señaladas como responsables, así como informes en vía de colaboración y se consultó certificado médico de integridad física del agraviado y demás diligencias necesarias para emitir la resolución correspondiente.

V. PRUEBAS.

Con base en lo estipulado en los artículos 48 y 49 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, en relación con los numerales 150, 151, 152, 153 y 154 del Reglamento Interior de este Organismo, durante el procedimiento realizado por esta Institución se recabaron los elementos probatorios documentales, remitidos tanto por el agraviado como por las autoridades señaladas como responsables, así como las declaraciones necesarias para la emisión de la presente Recomendación.

VI. CONSIDERACIONES PREVIAS

1. Previo a entrar al estudio de los hechos por los cuales este Organismo emite la presente Recomendación, se hace necesario advertir que, de la narrativa de hechos, **VD,** refirió haber sido detenido por elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Guadalupe, Zacatecas, quienes, luego de preguntarle por sus generales, se percató que en su contra se encontraba vigente una orden de aprehensión, por ese motivo lo detuvieron y lo trasladaron a la referida Dirección de Seguridad Pública, en donde fue revisado por un médico y permaneció alrededor de 2 horas; además de ser presentado ante el Juez Comunitario y firmó documentos que no leyó, luego los mismos elementos lo trasladaron “a la judicial”, en donde le tomaron fotografías y volvió a firmar documentos, los cuales tampoco leyó, asimismo, le tomaron muestra de sus huellas dactilares, permaneciendo en este lugar alrededor de 3 horas, para luego ser trasladado por “los judiciales” al Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas.

2. Luego de la investigación emprendida en el expediente que ahora se resuelve, es de advertirse que la génesis de la detención de **VD** deriva de una carpeta de investigación que se sigue en su contra por la probable comisión de un delito, por lo cual, el día (...), en audiencia inicial, ante la inasistencia del imputado **VD**, la Fiscal del Ministerio Público **LICENCIADA SPFGJEZ5**, solicitó audiencia privada, a fin de requerir a la Jueza de Control **LICENCIADA SPTSJE2**, girara una orden de aprehensión en contra del referido quejoso, misma que se justificó y, por tanto, la Jueza expidió la orden de aprehensión en su contra.

3. La referida orden de aprehensión fue cumplimentada el día (...), por elementos de la Policía Metropolitana y puesto a disposición de la Coordinación de Aprehensiones, Colaboraciones y Extradiciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado, a las 17:00 horas; a su vez, el Inspector y Jefe, encargado del Grupo de Aprehensiones 1, de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado, **SPFGJEZ6,** realizó la puesta a disposición en esa misma fecha, ante el Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento

del Distrito Judicial de la Capital, a las 19:23 horas, según se desprende del oficio (…), en la causa penal (...).

4. Por lo cual se advierte que la detención ejecutada el día (...), en contra de **VD** se encuentra justificada legalmente, por existir un mandato judicial.

5. Por otra parte, se aprecia que, una vez cumplimentada la orden de aprehensión, **VD** fue puesto a disposición de manera inmediata ante la autoridad que correspondía, en este caso, por la existencia de un mandamiento judicial, a la Coordinación de Aprehensiones, Colaboraciones y Extradiciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado, en donde fue certificado de integridad física a las 17:15 y puesto a disposición del Órgano Jurisdiccional, a las 19:23 horas.

6. Por otro lado, este Organismo advierte que el derecho que le asistía a **VD** a una defensa adecuada por abogado[1], fue solventado, pues en la audiencia por cumplimiento de orden de aprehensión, desahogada el (...), se encontraba asistido del **LICENCIADO SPDP3,** Defensor Público, adscrito al Instituto de la Defensoría Pública del Estado.

7. Finalmente, no se deja de percibir que **VD**, en su calidad de imputado detenido, le fueron salvaguardados sus derechos que en esa calidad le asistían, pues desde su aprehensión, entre ellos, la integridad personal, ya que así se desprende de los certificados médicos de integridad física, por lo que no existe conducta alguna que reprochar a las corporaciones policiacas que lo resguardaron hasta su llegada al Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas, siendo éstas la Policía Metropolitana (quien cumplimentó el mandamiento judicial), así como la Policía de Investigación adscrita a la Coordinación de Aprehensiones, Colaboraciones y Extradiciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado.

VII. DERECHOS HUMANOS VULNERADOS:

A) Violación al derecho a la integridad personal, en relación con el deber del Estado garante.

1. El derecho a la integridad personal es aquél que tiene todo sujeto para no sufrir tratos que afecten su estructura corporal, sea física, fisiológica o psicológica, o cualquier otra alteración en el organismo que deje huella temporal o permanente, que cause dolor o sufrimiento grave con motivo de la injerencia o actividad dolosa o culposa de un tercero.[2]

2. Al respecto, la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 3 establece, que “[t]odo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.” De ahí que, la obligación de velar por el respeto y garantía de los derechos humanos, corresponde al Estado, como ente garante de éstos. En ese contexto, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, señala en su artículo 1.1, que los Estados, “se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción” sin discriminación alguna. Estas obligaciones generales de respeto y garantía, vinculantes para el Estado con respecto a toda persona, implican para éste un mayor nivel de compromiso al tratarse de personas en situación de riesgo o vulnerabilidad.”[3]

3. En ese sentido, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, precisa en su artículo 5.2, que “[t]oda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la

---

[1] Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, artículo 20, inciso B, fracción VIII y artículos 62 y 113, fracción XI, del Código Nacional de Procedimientos Penales

[2]CNDH Recomendación 69/2016 de fecha 28 de diciembre de 2016, párr. 135 y Recomendación 71/2016 del 30 de diciembre de 2016, párr. 111.

[3] Informe sobre los derechos humanos de las personas privadas de libertad en la Américas. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, https://www.oas.org/es/cidh/ppl/docs/pdf/ppl2011esp.pdf, párr. 46, de fecha de acceso 11 de julio de 2017.

dignidad inherente al ser humano."[4] Incluso, la Comisión Interamericana otorga especial atención a la situación de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad física. El hecho de que tales personas se encuentren en una situación de especial vulnerabilidad, aunado a la frecuente falta de políticas públicas al respecto que otorguen la prioridad que el tema merece, implica frecuentemente que las condiciones penitenciarias se caractericen por la violación sistemática de los derechos humanos de tales personas.[5]

4. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, respecto de la obligación del Estado como garante de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, ha establecido que "[e]n los términos del artículo 5.2 de la Convención toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal y el Estado debe garantizarle el derecho a la vida y a la integridad personal. En consecuencia, el Estado, como responsable de los establecimientos de detención, es el garante de estos derechos de los detenidos."[6] Además, ha establecido que "de las obligaciones generales de respetar y garantizar los derechos, derivan deberes especiales, determinables en función de las particulares necesidades de protección del sujeto de derecho, ya sea por su condición personal o por la situación específica en que se encuentre…".[7]

5. Asimismo, ha señalado que "[f]rente a las personas privadas de libertad, el Estado se encuentra en una posición especial de garante, toda vez que las autoridades penitenciarias ejercen un fuerte control o dominio sobre las personas que se encuentran sujetas a su custodia. De este modo, se produce una relación e interacción especial de sujeción entre la persona privada de libertad y el Estado, caracterizada por la particular intensidad con que el Estado puede regular sus derechos y obligaciones y por las circunstancias propias del encierro, en donde al recluso se le impide satisfacer por cuenta propia una serie de necesidades básicas que son esenciales para el desarrollo de una vida digna."[8]

6. De ahí que, cuando el Estado priva de la libertad a una persona, asume una responsabilidad especial relacionada con el respeto y la garantía de sus derechos; ya que, tanto la seguridad como la integridad de éstas, queda bajo su custodia. Por ello, uno de los principales deberes del Estado consiste en ejercer un control efectivo sobre la seguridad interna de los centros penales a su cargo. Pues en la medida en que sea capaz de garantizar dicho aspecto, podrá garantizar los derechos humanos de las y los reclusos.[9] Si el estado es incapaz de mantener el orden y seguridad al interior de los centros penales, será incapaz de cumplir con el objetivo esencial de la pena privativa de libertad; la reforma y la readaptación social de las internas y los internos.

7. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que el respeto a los derechos humanos es un pilar fundamental del sistema penitenciario en México, cuya finalidad es la reeducación y reinserción social de los condenados, con base en el trabajo, la educación, la salud y el deporte.[10] En el mismo sentido, el Comité de Derechos Humanos ha establecido que las personas privadas de la libertad, gozan de todos los derechos humanos protegidos por las normas nacionales e internacionales en la materia, sin perjuicio de las restricciones inevitables en condiciones de reclusión.[11]

8. La Corte Interamericana ha señalado que, toda restricción a los derechos humanos de las personas privadas de su libertad, debe demostrar fehacientemente la necesidad de ésta y regular rigurosamente la limitación de que serán objeto. Asimismo, ha establecido que existen derechos -como la vida, la integridad, el debido proceso, entre otros-, cuya limitación

---

[4] **CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS (Pacto de San José)**, http://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm, fecha de consulta 21 de febrero de 2018.
[5] Segundo Informe sobre los Derechos Humanos en el Perú. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cap. IX, párr.1, https://www.cidh.oas.org/countryrep/Peru2000sp/capitulo9.htm, fecha de acceso 11 de julio de 2017.
[6] CrIDH. Caso Neira Alegría y otros Vs.Perú, Sentencia de 19 de enero de 1995, párr. 60.
[7] Caso Vélez Loor Vs. Panamá, Sentencia de 23 de noviembre de 2010 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), párr. 98
[8] CrIDH. Caso "Instituto de Reeducación del Menor" Vs. Paraguay. Sentencia de 2 de septiembre de 2004 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), párr.152.
[9] Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe sobre los derechos humanos de las personas privadas de libertad en la Américas, aprobado el 31 de diciembre de 2011, págs. 3-6.
[10] Art. 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
[11] Comité de Derechos Humanos, Observación General no. 21 Trato humano de las personas privadas de!a libertad, párr. 3.

o restricción está prohibida; ya que, toda persona privada de su libertad tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal y el Estado debe garantizarle el derecho a la vida y a la integridad personal. En consecuencia, el Estado como responsable de los establecimientos de detención, es el garante de estos derechos de los detenidos.[12]

9. Luego, a través del caso Instituto de Reeducación de Menor, la Corte determinó que, la garantía de esos derechos corresponde al Estado ya que el interno se encuentra bajo su sujeción y la compurgación de su pena, debe limitarse a la restricción del derecho a la libertad, no anular su titularidad respecto a los diversos derechos humanos que le asisten. Es decir, al privarse de la libertad a una persona, el Estado coloca a ésta en una institucionalización total, ya que al permanecer en un centro de reclusión los diversos aspectos de su vida se someten a una regulación y control absoluto que, entre otros aspectos, disminuyen radicalmente las posibilidades de autoprotección.

10. Por otro lado, el reconocimiento de la dignidad humana inherente a toda persona, con independencia de sus condiciones particulares o situación jurídica, es una disposición universalmente aceptada en el derecho internacional. En consecuencia, instrumentos como la Declaración Americana y la Convención Americana, reconocen el derecho a la integridad personal de toda persona sujeta a la jurisdicción del Estado.[13] AI respecto el Comité de Derechos Humanos ha establecido que el trato humano y respeto de la dignidad de las personas privadas de su libertad es una norma de aplicación universal, que no depende de los recursos materiales del Estado. En el mismo sentido, los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, reconocen que todas las personas privadas de su libertad que estén sujetas a la jurisdicción del Estado deberán ser tratadas humanamente, con irrestricto respeto a su dignidad, derechos y garantías fundamentales. Dicha garantía se encuentra salvaguardada también en el Sistema Universal, a través del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que consagra de manera expresa en el artículo 10.1 el principio de trato humano como eje fundamental de las normas aplicables a las personas privadas de su libertad.

11. De lo anterior, podemos advertir que la privación de la libertad tiene como único objetivo reeducar y reinsertar socialmente a aquellas personas que han cometido un delito. Por lo cual, el Estado debe cumplir una serie de obligaciones relacionadas con su efectiva protección, a fin de que se cumplan dichos objetivos, sin que se vulneren los demás derechos humanos que éstas poseen. Sobre todo, aquellos relacionados con la salvaguarda de su vida e integridad. Por lo cual, éste tiene la obligación de protegerlos contra actos de violencia provenientes tanto de sus propios servidores, como de los demás reos.

12. La Comisión Interamericana se ha pronunciado sobre la necesidad de que los Estados ejerzan un control efectivo de los centros penitenciarios, a fin de garantizar en todo momento la seguridad de las y los internos, sus familiares y de los propios trabajadores que ahí laboran. Pues, cuando el Estado deja de tener un efectivo control sobre éstos, se generan situaciones que ponen en riesgo no sólo la integridad, sino la propia vida de las personas que se encuentran privadas de su libertad. Contraviniéndose así una de las principales obligaciones en materia de derechos humanos: “garantizarlos”. Asimismo, se traduce en la imposibilidad de que las penas privativas cumplan con su objetivo de reeducación y reinserción social.

13. De manera específica, la Comisión Interamericana ha señalado que la violencia carcelaria es uno de los problemas más graves que enfrentan los sistemas penitenciarios de América Latina, y comprende tanto las agresiones de los agentes del Estado contra las personas privadas de la libertad, como los actos de violencia entre internos o de éstos contra los agentes del Estado o terceras personas.[14] Situación que sólo pueden ser prevenidas a través de acciones concretas que, por un lado, corrijan las deficiencias que permiten el

[12] Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Neira Alegría y otros vs. Perú, Sentencia de 29 de enero de 1995, Serie C No. 20, párr. 60.
[13] Cfr. Art. XXV de la Declaración Americana de los derechos y deberes del hombre y art. 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
[14] Comisión Interamericana de Derechos Humanos supra nota 1, pág. 38.

rearme de la población penitenciara y por el otro, permitan proveer los centros penitenciarios de personal capacitado y en número suficiente para asegurar el adecuado y efectivo control.

14. El Estado tiene la obligación de salvaguardar los derechos de las personas privadas de su libertad, sin perjuicio de las restricciones inevitables asociadas a las condiciones de reclusión; pues, al encontrarse éstas bajo su resguardo, no hay ni puede haber ninguna razón para que éste se sustraiga de su deber perentorio de salvaguardar la vida e integridad de las personas que se hallan sujetas a su control y que carecen por sí mismas de capacidad efectiva de autodeterminación y defensa.

15. Entonces, el derecho a la integridad física constituye un derecho humano fundamental para garantizar el ejercicio de otros derechos. Motivo por el cual, en el caso específico de las personas privadas de su libertad, el Estado adopta una posición especial de garante, que se traduce en el deber de respeto y garantía de los mismos. En ese contexto, el Sistema Interamericano precisa que, el derecho a la integridad personal se encuentra reconocido en los artículos I, XXV y XXVI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en el artículo 5 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, al establecerse que toda persona tiene derecho a que se le respete su integridad física, psíquica y moral. Asimismo, señala de manera específica que, toda persona que sea privada de su libertad gozará de un tratamiento humano durante dicha privación. La protección de este derecho es tal que, la Convención Americana establece la inderogabilidad de este derecho en caso de guerra, de peligro público o de otras emergencias que amenacen la independencia o seguridad del Estado.[15]

16. Así, podemos advertir que, en el Sistema Interamericano, del cual forma parte nuestro país, no es posible suspender el goce del derecho a la integridad personal, independientemente de sus circunstancias particulares. En este sentido, en los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, se estableció la obligación del Estado consistente en proteger a éstas contra todo tipo de amenazas, actos o conductas que tengan como finalidad anular la personalidad o disminuir la capacidad física o mental de la persona.[16] Situación que cobra especial relevancia tratándose de personas privadas de su libertad, pues su resguardo y control se encuentra completamente bajo el Estado; lo que obliga a éste a adoptar medidas concretas que garanticen de manera efectiva el ejercicio pleno de este derecho.

17. AI respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que la responsabilidad del Estado, respecto a garantizar el derecho a la integridad de las personas privadas de su libertad, no se circunscribe a la obligación negativa de abstenerse de infligir un daño a dichas personas; ya que, al tener éste el control sobre la vida de las y los reclusos, sus obligaciones se amplían e incluyen establecer medidas de seguridad y control necesarias para preservar la vida e integridad personal de las personas privadas de su libertad[17]. De ahí, que el Estado deba adoptar las medidas necesarias para prevenir que las personas privadas de su libertad sean atacadas por otros reclusos. Por lo cual, dichos centros deben contar con vigilancia constante y adecuada para mantener la seguridad y el control de internos.

18. De igual manera, en el Caso Tibi *vs.* Ecuador, la Corte determinó que, el Estado tiene además el deber de investigar, sancionar y reparar toda violación a este derecho cometido en perjuicio de las personas que se encuentran bajo su custodia. Por lo cual, debe de iniciar de oficio y de manera inmediata una investigación efectiva que permita identificar, juzgar y sancionar a los responsables de dichas agresiones.

19. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 1°, párrafos primero y tercero, establecen la obligación del Estado garante, respecto de la promoción, respecto, protección y garantía de los derechos humanos, cuando señala que “todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías

[15] Art. 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
[16] Principio 1 de Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de la Libertad en las Américas.
[17] Comisión Interamericana de Derechos Humanos, supra nota 1, pág. 134.

para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece."[18] Por lo que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.[19]

20. En particular, por lo que hace a las personas privadas de su libertad, el artículo 18, párrafo segundo de la Constitución Federal, establece que "el sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley."[20]En esas circunstancias, "el Estado es el garante de la seguridad de quienes se encuentren bajo su custodia en los centros penitenciarios del país."[21]

21. La Ley Nacional de Ejecución Penal, se encuentra armonizada a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales, pues establece que todas las personas privadas de su libertad, gozarán de todos los derechos previstos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, al señalar que "las personas privadas de su libertad en un Centro Penitenciario, durante la ejecución de la prisión preventiva o las sanciones penales impuestas, gozarán de todos los derechos previstos por la Constitución y los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, siempre y cuando estos no hubieren sido restringidos por la resolución o la sentencia, o su ejercicio fuese incompatible con el objeto de éstas. Para los efectos del párrafo anterior, se garantizarán, de manera enunciativa y no limitativa…" "[t]oda persona privada de la libertad tiene derecho a que se garantice su integridad moral, física, sexual y psicológica;"[22]

22. En ese contexto, la autoridad penitenciaria, como representante del Estado en los centros de reclusión y detención, tiene a su cargo la administración y operación del Sistema Penitenciario, basada en el respeto a los derechos humanos, supervisando que en las instalaciones de los centros, se mantenga la seguridad, tranquilidad e integridad de las personas privadas de su libertad, según lo disponen los artículos 14, 15 fracción I, 19 fracción II, y 20 fracciones V y VII de la Ley Nacional de Ejecución Penal, "la Autoridad Penitenciaria organizará la administración y operación del Sistema Penitenciario sobre la base del respeto a los derechos humanos, el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte, como medios para procurar la reinserción de la persona sentenciada a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, y supervisará las instalaciones de los Centros Penitenciarios para mantener la seguridad, tranquilidad e integridad, de las personas privadas de la libertad, del personal y de los visitantes, ejerciendo las medidas y acciones pertinentes para el buen funcionamiento de éstas."[23]

23. Y una de sus funciones básicas será "[g]arantizar el respeto a los derechos humanos de todas las personas que se encuentren sujetas al régimen de custodia y vigilancia en un Centro Penitenciario;"[24]. Por lo que la custodia penitenciaria será una atribución de la Autoridad Penitenciaria consistente en: "[s]alvaguardar la vida, la integridad, la seguridad y los derechos de las personas privadas de la libertad, visitantes y personal adscrito a los Centros Penitenciarios y las demás instalaciones que determinen las disposiciones aplicables; así como hacer cumplir su normatividad;"[25]. Además de [p]reservar el orden y tranquilidad en el interior de los Centros, evitando cualquier incidente o contingencia que ponga en riesgo la integridad física de las personas privadas de la libertad, visitas y personal de los mismos;"; "[s]alvaguardar la integridad de las personas y bienes en los Centros, así

---

[18] Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150917.pdf, fecha de consulta 21 de febrero de 2018.
[19] Ídem.
[20] Ídem.
[21]CNDH Recomendación 04/2016 de fecha 25 de febrero de 2017, párr. 29.
[22]Ley Nacional de Ejecución Penal, artículo 9.
[23]Ídem.
[24]Ídem.
[25]Ídem.

como garantizar, mantener y restablecer el orden y la paz en los mismos, utilizando para ello los protocolos aplicables, con apoyo en las herramientas, mecanismos y equipo necesarios disponibles para el cumplimiento de sus atribuciones; […]"[26]

24. En el presente caso, **VD** refirió que, sin precisar la fecha exacta, fue detenido, pues existía en su contra una orden de aprehensión, por lo cual pasó una noche en el Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas; al siguiente día, le solicitó a un custodio si lo podían apoyar con comida, pues desde su detención no había ingerido alimento, ante lo cual el custodio le dijo que sí. Sin embargo, al transcurrir alrededor de una hora, volvió a solicitar alimento, momento en el que abren la ventana de la puerta de la celda en la que se encontraba y le propinan un golpe en la cara, exigiéndole el custodio que no estuviera pateando la puerta; pero, cuando refirió que él no lo había hecho, el custodio se molestó, ingresó a la celda y lo golpeó, después entraron alrededor de 4 o 5 custodios más y lo golpearon, propinándole patadas. Incluso uno de los custodios lo amenazó de muerte en caso de que los denunciara.

25. Derivado de la narrativa de los hechos, la investigación fue dirigida en dos vertientes, la primera, para corroborar que, en el momento de la aprehensión, en el desahogo de la audiencia por cumplimiento de orden de aprehensión, en la cual se decretó la suspensión condicional de proceso a prueba, **VD** se encontraba íntegro en la superficie corporal; la segunda, que una vez que regresó al Centro Regional de Reinserción Social, con su boleta de liberación expedida por el Juez de Control, fue dolosamente lesionado.

26. Así, el (...), en audiencia privada para solicitar orden de aprehensión, la Jueza de Control **SPTSJE2**, a petición de la Fiscal del Ministerio Público, **LICENCIADA SPFGJEZ5**, giró orden de aprehensión en contra de **VD**. En cumplimiento a la referida orden, elementos de la Policía Metropolitana, ejecutaron su cumplimiento, por lo que fue puesto a disposición a las 17:00 horas, en la Dirección de Aprehensiones de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado, en donde el **DOCTOR SPFGJEZ4**, Perito Médico Legista, emitió el certificado médico de integridad física, a través del oficio (...) ML PM.

27. En esa misma fecha **VD**, fue trasladado de la Fiscalía General de Justicia del Estado, al Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas, por lo que, a su ingreso, el **DOCTOR SP10**, certificó que se encontraba clínicamente sano y que no presentaba lesiones qué certificar.

28. Luego, mediante un informe rendido por el Comandante **SP1**, al que adjuntó fotografías a color, tanto del ingreso, como del egreso de **VD**, se advierte que el día (...), a las 20:09 horas, el privado de la libertad se encontraba sin lesión alguna en su rostro, con lo cual se corrobora lo señalado en los certificados médicos referidos.

29. En ese mismo tenor, el día siguiente de su aprehensión, a las 09:42 horas del (...), según se aprecia, en la audiencia por cumplimiento de orden de aprehensión, ante el Juez de Control **SPTSJE3**, y ante el Defensor Público **LICENCIADO SPDP3**, el aquí quejoso **VD**, mientras dialogaba de frente con su defensor, colocó su cubrebocas por debajo de la barbilla, sin que en ese momento, ninguno de los servidores públicos advirtiera lesión alguna en el rostro del detenido y, sin que él hiciera mención alguna al respecto.

30. En esa audiencia, previo a concluirla, el Juez de Control dejó sin efectos la retención judicial y giró la boleta de libertad en favor de **VD**, en virtud de haberse celebrado una solución alterna del procedimiento. Entonces, hasta ese momento, la víctima directa se encontraba sin lesión alguna en la superficie corporal.

31. Sin embargo, según lo refiere **VD**, desde su detención ocurrida el día (...), no había recibido alimento alguno, por ello, al estar de regreso en el Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas, solicitó a un guardia de seguridad y custodia le proporcionara alimento, sin que esto ocurriera, por lo cual, aproximadamente una hora más tarde, volvió a tocar la puerta pidiendo alimento, ante lo cual, un oficial abrió la ventana y le

[26] Ídem.

tiró un golpe a la cara, diciéndole que no estuviera pateando la puerta, al negar esta acción el quejoso, el custodio se enojó, entró a la celda y lo golpeó; refiriendo que, detrás de él, llegaron entre 4 o 5 elementos más, quienes también lo agredieron y, uno de ellos, lo amenazó de muerte.

32. Lo narrado por la víctima, merece un análisis minucioso y por separado, pues en primer lugar, debemos pronunciarnos al derecho que les asiste a las personas privadas de la libertad a recibir alimento, ya que, por su condición, ellos mismos no pueden hacerse llegar ningún recurso que sacie esta necesidad fisiológica. Entonces, era el Estado, a través del personal adscrito al Centro Regional de Reinserción Social Varonil, ubicado en Cieneguillas, Zacatecas, quien se encontraba obligado a proporcionar a **VD** alimento, por el tiempo que permaneciera interno.

33. Lo anterior es así, pues es una obligación del Estado garante de proporcionar suministros a las personas privadas de la libertad. Así se desprende del Informe Sobre los Derechos Humanos de las Personas Privadas de Libertad en las Américas[27], y en los Principios y Buenas Prácticas Sobre la Protección de las Personas Privadas de la Libertad en las Américas[28], al referirse que, las personas privadas de libertad tendrán el derecho a recibir una alimentación que responda en calidad, cantidad y condiciones de higiene, a una nutrición adecuada y suficiente, la que será brindada en horarios regulares y su suspensión o limitación, como medida disciplinaria, deberá ser prohibida por la ley.

34. En ese mismo sentido, las Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos[29], en su artículo 20.1 al referir que todo recluso recibirá de la administración, a las horas acostumbradas, una alimentación de buena calidad, bien preparada y servida, cuyo valor nutritivo sea suficiente para el mantenimiento de su salud y de sus fuerzas.

35. Por su parte, la Ley Nacional de Ejecución Penal, en el artículo 9, refiere que los derechos de las personas privadas de su libertad en un Centro Penitenciario, ya sea durante la ejecución de la prisión preventiva o las sanciones penales impuestas, gozarán de todos los derechos previstos por la Constitución y los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, entre ellos, recibir alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, adecuada para la protección de su salud[30].

36. Entonces, al encontrarse los internos bajo la custodia del Estado, en virtud de la especial relación de sujeción, deben ser las autoridades carcelarias las que garanticen los alimentos, pues las personas privadas de la libertad no cuentan con una opción distinta a la administración para alcanzar la plena realización de ese derecho, razón que justifica que, por tratarse de sujetos especialmente vulnerables, la garantía de su derecho deba ser reforzada, porque quienes se encuentran obligados a garantizarles el abastecimiento de suministros a los reclusos, son las autoridades penitenciarias.

37. Así las cosas, con copia íntegra de la queja y su ratificación, se corrió traslado a la autoridad penitenciaria a efecto de que rindiera el informe respectivo y, una vez rendido éste, no se advierte señalamiento alguno del porqué no se le proporcionó alimento al agraviado; ya que, tomando en cuenta la fecha y hora del registro fotográfico de ingreso y egreso, **VD**, llegó a las instalaciones del Centro Varonil, aproximadamente a las 20:00 horas del (...), y salió de este lugar el día siguiente (...), aproximadamente a las 14:40 horas, por lo que queda claro que permaneció aproximadamente 18 horas con 40 minutos, privado de su libertad, mismo tiempo en que le fue negado el derecho de obtener alimentos.

38. Lo anterior, además, se corrobora con las declaraciones efectuadas por **SP2** y **SP4**, elementos de seguridad y custodia, quienes confirmaron que **VD**, pedía alimento. El primero de los citados enunció, en primera persona, que a él le pidió de comer el agraviado, respondiéndole que lo esperara porque estaba recibiendo el turno y que, el desayuno, llegaba entre las 9:30 o 10:00 de la mañana. Éste mismo elemento refirió, nuevamente, que

---

[27] Numeral 475 Principio XI.
[28] Principio XI. Alimentación y agua potable.
[29] Adoptadas por las Naciones Unidas en el año de 1955
[30] Fracción III.

fue a él a quien le insistió la persona privada de la libertad en recibir alimento, señalándole que tenía hambre, ante lo cual le contestó que cuando regresara de la audiencia le darían de comer, la cual no tardó mucho en concluir, pues regresó aproximadamente a las 11:00 horas, volviéndole a pedir el agraviado de comer. La segunda declaración fue coincidente en el sentido de que, aproximadamente a las 09:30 horas, **VD** tocó la puerta de su celda y le pidió a él que le dieran de comer, ante lo cual le respondió que en un rato más le daría, porque los cocineros aun no llevaban la comida. Con estas declaraciones, se acredita que la víctima directa se vio en la necesidad de pedir, por lo menos en cuatro ocasiones comida, pues tenía hambre. Sin que ninguna de las autoridades requeridas haya atendido su solicitud.

39. Con lo cual se acredita plenamente que la autoridad penitenciaria fue omisa en proporcionar alimento a la persona privada de la libertad **VD**, durante el tiempo que permaneció en las instalaciones del Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas, desatendiendo el contenido de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos y de la Ley Nacional de Ejecución Penal, incumpliendo también con su deber de respetar los derechos humanos, como lo establece el artículo 18 de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos.

40. En ese mismo tenor, este Organismo no soslaya que no solo fueron las 18 horas con 40 minutos de permanencia en las instalaciones del Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas, en que el quejoso **VD** estuvo sin alimento, pues a ello debemos agregarle el tiempo que transcurrió desde su detención, siendo ésta aproximadamente a las 17:00 del (...), por lo que se le suman 3 horas más, con lo cual, la víctima directa acumuló un total de 21 horas, con 40 minutos, de ayuno.

41. En virtud del tiempo que había transcurrido desde su detención, el día (...), **VD** se vio en la necesidad de solicitar, por lo menos en 4 ocasiones se le diera alimento, pues él no podía proveerlo por sí mismo, incumpliendo la autoridad penitenciaria con su deber de garante del derecho de alimentación. Entonces, esta súplica ocasionó una reacción completamente adversa a la esperada, pues un oficial de seguridad y custodia abrió la ventana de la celda en la que se encontraba y le propinó el primer golpe, de una serie que después le infringieron.

42. Pues retomando los párrafos precedentes, al momento de su aprehensión y todavía después de que se celebró la audiencia en la cual el Juez de Control **SPTSJE3**, le otorgó la libertad, **VD**, se encontraba sin lesión alguna en la superficie de su cuerpo, pero fue derivado de que hizo valer su derecho a pedir alimento, que los elementos de seguridad y custodia lo agredieron físicamente.

43. Así las cosas, al momento en que la **DOCTORA SP11**, médica adscrita al Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas, elaboró el certificado de prelibertad, pudo constatar que el día (...), **VD** presentaba las siguientes lesiones: en cráneo 2 hematomas de aproximadamente 2x2 centímetros, uno en región parietal derecha y otro en región occipital; equimosis en pómulo derecho de 3 centímetros de extensión, con evidencia de sangrado nasal; escoriación en región dorsal de 4 centímetros, eritematosa, no sangrante.

44. Parte de las lesiones a las que hace referencia el certificado de prelibertad, son visibles al remitirnos a las 5 fotografías a color, que remitió el Comandante **SP1**, Director del Centro Varonil, pues en ellas se advierte sangrado en el rostro de la víctima **VD.**

45. Además de las referidas pruebas, se cuenta con la testimonial de la quejosa **Q**, hermana de la víctima, quien afirmó que el día en que **VD** obtuvo su libertad, ella acudió a su domicilio y ahí pudo percatarse de que se encontraba lesionado y, por dicho de su hermano, esas agresiones las sufrió al interior del Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas, directamente por los custodios.

46. Además de ese testimonio, en el expediente de queja que ahora se resuelve, obran dos testimoniales más que resultan trascendentes, pues son una narración directa de las personas que presenciaron con sus sentidos las agresiones y afirmaron que quienes

golpearon a **VD** fueron los propios comandantes de turno que laboraron el día (...), a quienes les molestó que el quejoso estuviera tocando la puerta para pedir alimento, por lo que en un acto de represión, de inicio, abrieron la ventana de la celda en la que se encontraba y le propinaron un golpe en la cara, para enseguida entrar a la celda y continuar con las agresiones.

47. Las referidas testimoniales son las vertidas por **SP2** y **SP4**, quienes fueron coincidentes no solo en referir la necesidad de alimento de la víctima, sino que, ante la petición de comida, refirió el primero de los citados, llegaron los comandantes **AR4**[31] y "(...)"[32], quienes escucharon un golpe en la puerta, y le preguntaron de dónde provenía, por lo que, al informarles que del pasillo, éstos preguntaron a las personas privadas de su libertad que quién era, contestando que los golpes provenían de la estancia 2, en la cual se encontraba **VD**, ante lo cual, uno de los comandantes le pidió a **SP4**, que abriera la estancia, y el testigo pudo escuchar gritos y discusiones. Luego, su compañero **SP4**, le llamó para que se acercara con ellos, y lo que pudo ver, al entrar a la estancia, fue al detenido acostado en la cama, volteado hacia la pared; que luego de unos 10 minutos, después de que se fueron los comandantes, abrió la estancia y conversó con el detenido, aquí la víctima, fue quien le hizo el comentario que "se habían pasado de lanza con él", esto mientras se encontraba llorando, pues se sentía impotente. Afirmó el testigo haberse percatado que el detenido tenía sangre en la nariz. Asimismo, manifestó que pudo escuchar cuando uno de los comandantes, amenazó a **VD**, pues le decía que no sabía con quién se estaba metiendo.

48. Por su parte el diverso testigo, **SP4** refirió al personal de este Organismo que, después de que **VD** le volvió a pedir comida, pateó la puerta, momento en el cual el comandante **AR2**, al que apodan "(...)," se acercó y le dio un golpe en la cara con el puño cerrado. Después de un rato, el privado de la libertad volvió a patear la puerta, entonces los comandantes **AR1, AR2** ((...)), **AR4** ((...)) y, **AR2** ((...)), le pidieron las llaves de la estancia e ingresaron a la celda; que volvió a ver al aquí quejoso cuando le llevó su hoja de libertad, fijándose en ese momento que traía sangre en el cubre bocas y en lo que se alcanzaba a ver de la cara.

49. Con lo anterior queda debidamente acreditado el nexo causal que relaciona el daño sufrido por **VD**, a través de las lesiones que de manera intencional infringieron el día (...), los elementos de seguridad y custodia que, a decir de los testigos, quienes desplegaron esta conducta fueron **AR1, AR2** ((...)), **AR4** ((...)) y, **AR2** ((...)).

50. Con la conducta desplegada por los elementos de seguridad y custodia del Centro Regional de Reinserción Social de Cieneguillas, Zacatecas, que el (...), agredieron en su integridad física a **VD**, dejaron de cumplir con la posición de garante que, como autoridades penitenciarias tienen frente a las personas privadas de la libertad, con lo cual deben responder directamente por las violaciones al derecho humano a la integridad personal, en su modalidad de integridad física. Esto es así, pues, al privar de la libertad a las personas, el Estado detenta un control de sujeción especial sobre ellas y, por ende, se convierte en el responsable de salvaguardar todos aquellos derechos que no hayan sido restringidos por la reclusión corporal, lo cual no sucedió en el presente caso.

51. La dignidad humana implica el valor inherente al ser humano por ser un ente racional, lo que se traduce en el derecho que las personas tienen a ser valoradas como sujeto individual y social, con sus características y condiciones personales, pero en igualdad de circunstancias. Así, la dignidad de una persona es el soporte de sus derechos humanos, los que son inmutables, inherentes e inalienables y, por lo mismo, inviolables, en este sentido son contrarios a la dignidad, los tratos indignos, vejatorios, humillantes y ofensivos, a los que fue expuesto el quejoso **VD**, pues no solo no se le proporcionó alimento, sino que al solicitarlo, después de que llevaba más de 18 horas sin alimentarse, lo que obtuvo fue una agresión física que inició con un golpe en la cara, al cual se acumuló a la violencia perpetrada en conjunto por **AR1, AR2** ((...)), **AR4** ((...)) y, **AR2** ((...)), sin que en ninguno de ellos, incluyendo los testigos, fuera juicioso para detener la agresión.

---

[31] Según el informe de autoridad presentado el 23 de junio de 2021, su nombre es **AR4**
[32] Ídem, **AR2**

52. Así las cosas, debemos recordar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido que “Toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal y el Estado debe garantizarle el derecho a la vida y a la integridad personal. En consecuencia, el Estado, como responsable de los establecimientos de detención, es el garante de estos derechos de los detenidos”.[33]

53. También resolvió la Corte que: “Frente a las personas privadas de libertad, el Estado se encuentra en una posición especial de garante, toda vez que las autoridades penitenciarias ejercen un fuerte control o dominio sobre las personas que se encuentran sujetas a su custodia. De este modo, se produce una relación e interacción especial de sujeción entre la persona privada de libertad y el Estado, caracterizada por la particular intensidad con que el Estado puede regular sus derechos y obligaciones y por las circunstancias propias del encierro, **en donde al recluso se le impide satisfacer por cuenta propia una serie de necesidades básicas que son esenciales para el desarrollo de una vida digna**”.[34] Por lo que, “Ante esta relación e interacción especial de sujeción entre el interno y el Estado, este último debe asumir una serie de responsabilidades particulares y tomar diversas iniciativas especiales para garantizar a los reclusos las condiciones necesarias para desarrollar una vida digna y contribuir al goce efectivo de aquellos derechos que bajo ninguna circunstancia pueden restringirse o de aquéllos cuya restricción no deriva necesariamente de la privación de libertad y que, por tanto, no es permisible. De no ser así, ello implicaría que la privación de libertad despoja a la persona de su titularidad respecto de todos los derechos humanos, lo que no es posible aceptar”.[35]

54. Corolario de lo anterior, resulta evidente que los servidores públicos **AR1, AR2** ((...)), **AR4** ((...)) y, **AR2** ((...)), cuyas funciones consistían en la seguridad y custodia del Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas, incurrieron en violación al derecho a la integridad personal de **VD**, previstos en los artículos 1º, párrafos primero, segundo y tercero, 18, 19, último párrafo y 21, párrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 10.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1.1 y 5.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 3 del “Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley”. Por lo que esta Comisión reitera la importancia de que las autoridades en el ejercicio de sus funciones se apeguen al más estricto respeto al Estado de Derecho, sin que su conducta constituya quebrantamiento de la esfera de derechos de las y los gobernados.

55. Ahora bien, este Organismo no soslaya que, según lo informado por el Comandante **SP1**, Director del Centro Regional de Reinserción Social de Cieneguillas, Zacatecas, que **AR4** ((...)) y **AR2** ((...)), se encuentran inactivos por baja laboral; sin embargo, quedó plenamente acreditada su responsabilidad, por lo cual resulta procedente realizar pronunciamiento respecto de estas personas.

VIII. OMISIÓN DE PROTECCIÓN

56. La Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 3 establece, que “[t]odo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.” De ahí que, la obligación de velar por el respeto y garantía de los derechos humanos, corresponde al Estado, como ente garante de éstos. En ese contexto, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, señala en su artículo 1.1, que los Estados, “se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción” sin discriminación alguna. Estas obligaciones generales de respeto y garantía, vinculantes para el Estado con respecto a toda persona, implican para éste un mayor nivel de compromiso al tratarse de personas en situación de riesgo o vulnerabilidad.”

---

[33] “Caso “Neira Alegría y otros Vs. Perú”, (Fondo), sentencia de 19 de enero de 1995, p. 60.
[34] “Caso “Instituto de Reeducación del Menor Vs. Paraguay”, (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), sentencia de 2 de septiembre de 2004, p. 152.
[35] Ibídem, p. 153.

57. En ese sentido, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, precisa en su artículo 5.2, que “[t]oda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.” Incluso, la Comisión Interamericana otorga especial atención a la situación de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad física, ya que, el hecho de que tales personas se encuentren en una situación de especial vulnerabilidad, aunado a la frecuente falta de políticas públicas al respecto que otorguen la prioridad que el tema merece, implica frecuentemente que las condiciones penitenciarias se caractericen por la violación sistemática de los derechos humanos de tales personas.

58. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, respecto de la obligación del Estado como garante de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, ha establecido que “[e]n los términos del artículo 5.2 de la Convención toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal y el Estado debe garantizarle el derecho a la vida y a la integridad personal. En consecuencia, el Estado, como responsable de los establecimientos de detención, es el garante de estos derechos de los detenidos.” Además, ha establecido que “de las obligaciones generales de respetar y garantizar los derechos, derivan deberes especiales, determinables en función de las particulares necesidades de protección del sujeto de derecho, ya sea por su condición personal o por la situación específica en que se encuentre…”.

59. Asimismo, ha señalado que “[f]rente a las personas privadas de libertad, el Estado se encuentra en una posición especial de garante, toda vez que las autoridades penitenciarias ejercen un fuerte control o dominio sobre las personas que se encuentran sujetas a su custodia. De este modo, se produce una relación e interacción especial de sujeción entre la persona privada de libertad y el Estado, caracterizada por la particular intensidad con que el Estado puede regular sus derechos y obligaciones y por las circunstancias propias del encierro, en donde al recluso se le impide satisfacer por cuenta propia una serie de necesidades básicas que son esenciales para el desarrollo de una vida digna.”

60. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que el respeto a los derechos humanos es un pilar fundamental del sistema penitenciario en México, cuya finalidad es la reeducación y reinserción social de los condenados, con base en el trabajo, la educación, la salud y el deporte. En el mismo sentido, el Comité de Derechos Humanos ha establecido que las personas privadas de la libertad, gozan de todos los derechos humanos protegidos por las normas nacionales e internacionales en la materia, sin perjuicio de las restricciones inevitables en condiciones de reclusión.

61. La Corte Interamericana ha señalado que, toda restricción a los derechos humanos de las personas privadas de su libertad, debe demostrar fehacientemente la necesidad de ésta y regular rigurosamente la limitación de que serán objeto. Asimismo, ha establecido que existen derechos -como la vida, la integridad, el debido proceso, entre otros-, cuya limitación o restricción está prohibida; ya que, toda persona privada de su libertad tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal y el Estado debe garantizarle el derecho a la vida y a la integridad personal. En consecuencia, el Estado como responsable de los establecimientos de detención, es el garante de estos derechos de los detenidos.

62. Luego, a través del caso Instituto de Reeducación de Menor, la Corte determinó que, la garantía de esos derechos corresponde al Estado ya que el interno se encuentra bajo su sujeción y la compurgación de su pena, debe limitarse a la restricción del derecho a la libertad, no anular su titularidad respecto a los diversos derechos humanos que le asisten. Es decir, al privarse de la libertad a una persona, el Estado coloca a ésta en una institucionalización total, ya que al permanecer en un centro de reclusión los diversos aspectos de su vida se someten a una regulación y control absoluto que, entre otros aspectos, disminuyen radicalmente las posibilidades de autoprotección.

63. Por otro lado, el reconocimiento de la dignidad humana inherente a toda persona, con independencia de sus condiciones particulares o situación jurídica, es una disposición universalmente aceptada en el derecho internacional. En consecuencia, instrumentos como

la Declaración Americana y la Convención Americana, reconocen el derecho a la integridad personal de toda persona sujeta a la jurisdicción del Estado. AI respecto el Comité de Derechos Humanos ha establecido que el trato humano y respeto de la dignidad de las personas privadas de su libertad es una norma de aplicación universal, que no depende de los recursos materiales del Estado. En el mismo sentido, los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, reconocen que todas las personas privadas de su libertad que estén sujetas a la jurisdicción del Estado deberán ser tratadas humanamente, con irrestricto respeto a su dignidad, derechos y garantías fundamentales. Dicha garantía se encuentra salvaguardada también en el Sistema Universal, a través del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que consagra de manera expresa en el artículo 10.1 el principio de trato humano como eje fundamental de las normas aplicables a las personas privadas de su libertad.

64. De lo anterior, podemos advertir que la privación de la libertad tiene como único objetivo reeducar y reinsertar socialmente a aquellas personas que han cometido un delito. Por lo cual, el Estado debe cumplir una serie de obligaciones relacionadas con su efectiva protección, a fin de que se cumplan dichos objetivos, sin que se vulneren los demás derechos humanos que éstas poseen. Sobre todo, aquellos relacionados con la salvaguarda de su vida e integridad. Por lo cual, éste tiene la obligación de protegerlos contra actos de violencia provenientes tanto de sus propios servidores, como de los demás reos.

65. La Comisión Interamericana se ha pronunciado sobre la necesidad de que los Estados ejerzan un control efectivo de los centros penitenciarios, a fin de garantizar en todo momento la seguridad de las y los internos, sus familiares y de los propios trabajadores que ahí laboran. Pues, cuando el Estado deja de tener un efectivo control sobre éstos, se generan situaciones que ponen en riesgo no sólo la integridad, sino la propia vida de las personas que se encuentran privadas de su libertad. Contraviniéndose así una de las principales obligaciones en materia de derechos humanos: “garantizarlos”. Asimismo, se traduce en la imposibilidad de que las penas privativas cumplan con su objetivo de reeducación y reinserción social.

66. De manera específica, la Comisión Interamericana ha señalado que la violencia carcelaria es uno de los problemas más graves que enfrentan los sistemas penitenciarios de América Latina, y comprende tanto las agresiones de los agentes del Estado contra las personas privadas de la libertad, como los actos de violencia entre internos o de éstos contra los agentes del Estado o terceras personas. Situación que sólo pueden ser prevenidas a través de acciones concretas que, por un lado, corrijan las deficiencias que permiten el rearme de la población penitenciara y por el otro, permitan proveer los centros penitenciarios de personal capacitado y en número suficiente para asegurar el adecuado y efectivo control.

67. Así, el Estado tiene la obligación de salvaguardar los derechos de las personas privadas de su libertad, sin perjuicio de las restricciones inevitables asociadas a las condiciones de reclusión; pues, al encontrarse éstas bajo su resguardo, no hay ni puede haber ninguna razón para que éste se sustraiga de su deber perentorio de salvaguardar la vida e integridad de las personas que se hallan sujetas a su control y que carecen por sí mismas de capacidad efectiva de autodeterminación y defensa.

68. En el caso concreto, como se citó en el considerando precedente de la presente Recomendación, el día (...), **VD** sufrió conductas desplegadas de forma directa por quienes ejercían funciones de servidores públicos **AR1, AR2** ((...)), **AR4** ((...)) y, **AR2** ((...)), dañando su integridad personal, en su modalidad de integridad física, por las lesiones que le propinaron al interior de su celda, por el hecho de pedir alimento.

69. Sin embargo, en este apartado debe atenderse a las conductas omisivas en las que incurrieron los elementos de seguridad y custodia que presenciaron la violencia ejercida en contra de **VD**, siendo éstos **SP2** y **SP4**, quienes emitieron su declaración libre y espontánea ante este Organismo, de haber percibido con sus sentidos el momento justo cuando el comandante **AR2** (“(...)”) se acercó a la puerta de su celda y le dio un golpe en la cara con el puño cerrado, así como que, ante su insistencia de recibir alimento, los comandantes **AR1, AR2** ((...)), **AR4** ((...)) y, **AR2** ((...)), pidieron las llaves de la estancia donde se encontraba el

agraviado e ingresaron a la celda, por lo que momentos más tarde se pudieron percatar que éste presentaba sangre en el cubre bocas y en lo que se alcanzaba a ver de la cara.

70. En ese sentido, este Organismo no soslaya que los elementos de seguridad y custodia **SP2** y **SP4** eran subordinados de los comandantes[36] **AR1, AR2** ((...)), **AR4** ((...)) y, **AR2** ((...)), lo cual pudo haber generado en dichos testigos el temor a recibir de su parte alguna represalia si en el momento hacían algún pronunciamiento; sin embargo, tampoco se advierte que, en lo sucesivo, es decir después de los hechos que presenciaron, lo hayan hecho del conocimiento a las autoridades superiores del Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas, pues por encima de éstos se encuentran la Subjefatura de seguridad, el Jefe de seguridad, el Subdirector y el Director y si éstos no prestaran atención a su denuncia, por encima de estas autoridades se encuentra el Director Prevención y Reinserción Social en el Estado y el Secretario de Seguridad Pública.

71. Más aun, todas las autoridades y servidores públicos, en el ejercicio de sus funciones están obligadas a hacer del conocimiento a los Organismos protectores de Derechos Humanos, cuando tengan conocimiento de alguna vulneración a derechos humanos y, como toda autoridad, a cumplir con su deber de denunciar no solo ante este Organismo, sino ante las autoridades penales, para que investiguen la probable comisión de un delito, obligación que se desprende de los artículos 1, 18, 109, 128 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1° de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 1° y 5° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; así como el numeral 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que el sistema penitenciario se organiza sobre la base del respeto a los derechos humanos.

IX. CONCLUSIONES DEL CASO.

1. En el presente caso puede advertirse que la actuación de los elementos de seguridad y custodia adscritos al Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas, **AR1, AR2** ((...)), **AR4** ((...)) y, **AR2** ((...)), desatendieron los principios constitucionales sobre los que se rigen (legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución), pues el uso y abuso de la fuerza y la violencia que desplegaron en contra de **VD**, no solamente se trató de una conducta ilícita, sino de afectación directa a la integridad personal, en relación con la integridad física y a la dignidad humana, en virtud de que, una vez que solicitó alimento, pues esto es un derecho de toda persona privada de la libertad, lejos de obtener suministro alimenticio, le propinaron inicialmente un golpe y, posteriormente, entre los cuatro, lo agredieron, vulnerando con ello su derecho a la integridad personal, en su modalidad de integridad física, faltando, por tanto, con su deber de garantes de las personas privadas de la libertad.

2. Por la naturaleza de las funciones que realiza el personal de custodia penitenciaria, éstos debían acatar irrestrictamente lo establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal y el Protocolo de Ingreso de la Persona Privada de la Libertad, que establecen que deben garantizar el respeto a los derechos humanos de todas las personas que se encuentren sujetas al régimen de custodia y vigilancia en un Centro Penitenciario[37]; asimismo, mantener la vigilancia, orden y tranquilidad de los Centros Penitenciarios; salvaguardar la vida, **la integridad**, la seguridad y los derechos de las personas privadas de la libertad; además, hacer cumplir su normatividad[38]; mantener la vigilancia, orden y tranquilidad de los Centros

---

[36] Reglamento Interno de los Centros De Readaptacion Social, artículo 81. Integran el personal de los centros de readaptación social:
I. Director;
II. Subdirector;
III. Jefe de seguridad;
IV. Subjefatura de seguridad;
V. Comandantes de grupo de vigilancia;
VI. Custodios;
(…)

[37] Ley nacional de Ejecución Penal, artículo 15, fracción I

[38] Ídem, artículos 19 y 20

Penitenciarios[39]; sin embargo, **AR1, AR2** ((...)), **AR4** ((...)) y, **AR2** ((...)), incumplieron con dichas funciones, al omitir proporcionarle por más de 18 horas alimento y al solicitar comida, transgreden físicamente al interno al provocarle las lesiones descritas en el certificado de prelibertad, suscrito por la **DOCTORA SP11**, Médico de Guardia del Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas.

3. Luego, toda persona sometida a cualquier forma de detención o prisión deberá ser tratada humanamente y con el respecto debido a la dignidad inherente al ser humano, cuestión que en el presente caso no aconteció.

4. Considerando lo antes expuesto, los elementos de seguridad y custodia adscritos al Centro Regional de Reinserción Social de Cieneguillas, Zacatecas, **AR1, AR2** ((...)), **AR4** ((...)) y, **AR2** ((...)), omitieron cumplir con lo dispuesto en los artículos 1°, párrafo tercero[40], y 21 párrafo noveno[41] de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como el 1.1[42] y 5.1[43], de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos[44]; 10.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos[45]; 3 del Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley[46].

5. En ese mismo sentido, se reprocha a los elementos de seguridad y custodia **SP2** y **SP4** la omisión en que incurrieron de proteger a **VD** de los actos de violencia a que fue sometido por sus superiores jerárquicos, el día (...), así como de denunciar estos hechos ante sus superiores Subjefatura de seguridad, el Jefe de seguridad, el Subdirector y el Director, Director Prevención y Reinserción Social en el Estado y Secretario de Seguridad Pública, a fin de que estas autoridades actuaran en consecuencia, pudiendo hacer del conocimiento a la autoridad investigadora de los delitos, así como dar aviso a este Organismo, a fin de que se integraran las respectivas investigaciones.

IX. REPARACIONES.

1. De conformidad con lo establecido, el artículo 1º de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos, el cual establece en su párrafo tercero que “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”.

2. Así, en un respeto irrestricto del Estado de Derecho, las personas gozarán de la garantía de que en caso de ser objeto de violación a sus derechos humanos, podrán reclamar que el o los responsables de dicha vulneración sean sancionados, pues el Estado tiene la posición de garante de sus derechos y por lo tanto; según lo ha dispuesto la Suprema Corte de

---

[39] Así lo define el Protocolo de Ingreso de la Persona Privada de la Libertad

[40] “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.”

[41] La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes en la materia. La seguridad pública comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución.

[42] 1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

[43] 5.1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral.

[44] 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.

[45] 10.1. Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.

[46] Artículo 3. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley podrán usar la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas.

Justicia de la Nación, "*Las víctimas de violación a los derechos humanos o sus familiares, tienen derecho a la reparación adecuada del daño sufrido. Lo cual debe concretarse a través de medidas individuales tendientes a restituir, indemnizar y rehabilitar a la víctima, así como de medidas de satisfacción de alcance general y garantías de no repetición, mediante los procedimientos previstos legalmente para esos efectos, lo cual no es una concesión graciosa, sino el cumplimiento de una obligación jurídica. Lo anterior deriva tanto del régimen previsto constitucionalmente como de los instrumentos internacionales ratificados por México y de los criterios de organismos internacionales, los cuales se manifiestan claramente en el sentido de que es un derecho efectivo de las personas agraviadas a nivel fundamental obtener una reparación proporcional a la gravedad de las violaciones y al daño sufrido*".[47]

3. El deber de reparación por violaciones a los derechos humanos, a nivel internacional se encuentra dispuesto tanto en el sistema universal como regional de protección a los derechos humanos. Puesto que en el ámbito universal, se advierte en los "*Principios y directrices básicos sobre el derecho a las víctimas de violaciones manifiestas a las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves al derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones"*, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 2005, donde se dispone que las violaciones de derechos humanos deben contemplar, de forma apropiada y proporcional a la gravedad de ésta, una reparación plena y efectiva en las formas siguientes: indemnización, restitución, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, lo cual a su vez es también contemplado por la Ley General de Víctimas, en sus artículos 1, último párrafo, 7, fracción I y II, y particularmente en el texto legal del artículo 26, que establece que *"Las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera oportuna, plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva por el daño que han sufrido como consecuencia del delito o hecho victimizante que las ha afectado o de las violaciones de derechos humanos que han sufrido, comprendiendo medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y medidas de no repetición"*, además por lo previsto en el artículo 27 del mismo ordenamiento legal. Por ello, resulta particularmente importante la ejecución de las medidas de reparación por parte del Estado dirigidas a la no repetición en Zacatecas de hechos similares a los ocurridos en el presente caso.

4. En el sistema regional, la Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 63.1 establece que cuando se acredite la existencia de una violación a un derecho o libertad protegidos, se deberá garantizar al lesionado el goce de su derecho, de igual forma y de ser procedente se deberán las consecuencias de la situación que se configuró como violación a esos derechos y se otorgara el pago de una indemnización justa al lesionado.

5. Por su parte, a Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha establecido que l*as reparaciones, consisten en las medidas que tienden a hacer desaparecer los efectos de las violaciones cometidas. Su naturaleza y su monto dependen del daño ocasionado en los planos tanto material como inmaterial.*[48]

6. Este doble alcance de la norma reparatoria, ha incidido cada vez con mayor frecuencia en el desarrollo de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dando lugar a una arquitectura reparatoria que tendrá como objetivo, no sólo borrar las huellas que en la víctima produjo el actuar del Estado, sino también evitar que ese tipo de hechos se vuelvan a repetir.[49]

7. Por lo que hace a este derecho, el artículo 51 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, dispone que, al acreditarse una violación a los derechos humanos atribuible a un servidor público estatal, la Resolución formulada al respecto debe incluir las medidas que procedan para lograr la efectiva restitución de las personas afectadas en sus derechos.

---

[47] Tesis P/LXII/2010, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena Época, t XXXIII, enero de 2011, pág. 28

[48]Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Acevedo Jaramillo y otros Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de febrero de 2006. Serie C No. 144, Párr. 175.

[49] Rousset Siri, Andrés Javier (2011): *El Concepto de reparación integral en la Jurisprudencia Interamericana de Derechos humanos.* Revista Internacional de Derechos Humanos / ISSN 2250-5210 / 2011 Año I – N1 59 www.revistaidh.org

Modalidades de la reparación del daño. La reparación del daño comprende diversas modalidades en las que se puede materializar:

A) La indemnización.

1. La indemnización ha sido reconocida como una medida que tiende a compensar a las víctimas por afectaciones materiales sufridas con motivo de la falta que ha cometido el Estado en su perjuicio, entre ellos, el daño emergente, el lucro cesante y el daño moral sufrido por el agraviado;[50] lo que no puede implicar ni un empobrecimiento ni un enriquecimiento para la víctima o sus sucesores.[51]

2. En el caso que nos ocupa, y en virtud de los hechos anteriormente vertidos, se considera que es procedente la indemnización para **VD**, quien sufrió el día (...), diversas lesiones, concretamente en el cráneo, consistentes en 2 hematomas de aproximadamente 2x2 centímetros, uno en región parietal derecha y otro en región occipital; equimosis en pómulo derecho de 3 centímetros de extensión, evidencia de sangrado nasal y escoriación en región dorsal de 4 centímetros, eritematosa, no sangrante. Lesiones que son directamente atribuibles a los elementos de seguridad y custodia adscritos al Centro Regional de Reinserción Social de Cieneguillas, Zacatecas, **AR1, AR2** ((...)), **AR4** ((...)) y, **AR2** ((...)), por lo cual deberá ser inscrito en el Registro Estatal de Víctimas, para que, conforme los lineamientos establecidos en la Ley de Atención a Víctimas del Estado de Zacatecas, sea indemnizado.

B) Satisfacción.

1. Respecto a este concepto, de conformidad con lo establecido por los Principios sobre el derecho a obtener reparaciones, ésta debe incluir, cuando sea el caso, la totalidad o parte de las medidas siguientes: a) medidas eficaces para conseguir que no se continúe con las violaciones; b) la verificación de los hechos y la revelación pública y completa de la verdad; c) una declaración oficial o decisión oficial que restablezca la dignidad, la reputación y los derechos de la víctima; d) una disculpa pública; y e) la aplicación de sanciones judiciales o administrativas a los responsables de las violaciones.[52]

2. Este Organismo considera que la autoridad a quien va dirigida la presente Resolución debe iniciar los procedimientos administrativos en contra de los servidores públicos que vulneraron el derecho a la integridad personal del agraviado y que motivaron el presente Instrumento.

3. Se deberán realizar las investigaciones necesarias para determinar la responsabilidad por acción u omisión en que incurrieron los comandantes y elementos de seguridad y custodia adscritos al Centro Regional de Reinserción Social de Cieneguillas, Zacatecas, **AR1, AR2** ((...)), **AR4** ((...)) y, **AR2** ((...)), **SP2** y **SP4** y, en su caso, sancionarlos, según corresponda de acuerdo a la participación en los hechos.

4. Sin que este Organismo pierda de vista que, por lo que hace a **AR2** ((...)) y **AR4** ((...)), éstos se encuentran inactivos por baja laboral, por lo que, en todo caso, se deberá establecer un mecanismo de registro de las personas en cita, a fin de que no vuelvan a ser recontratadas para desempeñar funciones dentro de ninguna de las instituciones policiales de la Secretaría de Seguridad Pública, como son Policía Estatal, Policía Preventiva de Tránsito, la Policía de Vigilancia y Custodia del Sistema Penitenciario y del Sistema de Justicia para Adolescentes, la Policía Metropolitana[53].

C) Garantía de no repetición.

---

[50]Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Velázquez Rodríguez vs Honduras, Reparaciones y Costas, Sentencia 21 de junio de 1989, Serie C, No. 7, párr. 38.
[51]Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Tinoco Estrada y otros vs Bolivia, Fondo, reparación y costas. Sentencia 27 de noviembre de 2008 C, No. 211.
[52] ONU, Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas a las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves al derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, A/RES/60/147, 21 de marzo de 2006, párr.22
[53] Ley de las Instituciones Policiales de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas, artículo 2, fracción V

1. Este Organismo estima que la capacitación a los servidores públicos debe continuar implementándose y debe materializarse en programas y cursos permanentes de capacitación en temas de derechos humanos, particularmente en el derecho a la integridad personal, en su modalidad de integridad física, así como al derecho a la alimentación, ambos en relación con el deber del Estado garante de las personas privadas de su libertad.

2. Asimismo, esta Comisión considera trascendente fortalecer las capacidades institucionales mediante capacitación sobre los principios de protección a los derechos humanos y sobre los límites a los que deben estar sometidas, a fin de evitar que hechos como los sufridos por el agraviado se vuelvan a presentar.

3. Este Organismo reafirma su compromiso e intención de colaborar en el desarrollo y contenidos de la capacitación, a fin de contribuir en la mejora constante de las actividades de los funcionarios públicos, con pleno respeto a los derechos humanos de todas las personas que se encuentran en territorio zacatecano.

X. RECOMENDACIONES.

PRIMERA. En un plazo máximo de un mes, posterior a la notificación de esta Recomendación, se inscriba en el Registro Estatal de Víctimas a **VD**, en calidad de víctima directa de violaciones a derechos humanos. Asimismo, dentro del plazo máximo de un año, contado a partir de la notificación de la presente Recomendación, se garantice su acceso oportuno al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, previsto en la Ley de Atención a Víctimas del Estado de Zacatecas, a efecto de que se realice la indemnización correspondiente; debiendo remitir a este Organismo protector de Derechos Humanos, las constancias con que acredite su cumplimiento.

SEGUNDA. Dentro del plazo máximo de un mes, contado a partir de la aceptación de esta Recomendación, se valore y determine si el agraviado requiere de atención médica y psicológica, relacionada con los hechos de la presente queja. De ser el caso, en un plazo de un mes, posteriores a la realización de dicha valoración, se realicen las gestiones necesarias para que, de ser voluntad del agraviado, inicie su tratamiento hasta su total restablecimiento.

TERCERA. En un plazo no mayor de un mes, contados a partir de la aceptación de la presente Recomendación, se realicen las acciones necesarias para que se inicien las investigaciones administrativas con el fin de determinar la responsabilidad de **AR1** y **AR2** ((...)), servidores públicos implicados en el presente caso, a quiénes se le atribuye la vulneración del derecho a la integridad personal, en su modalidad de integridad física.

CUARTA. Dentro de un plazo máximo de tres meses, contados a partir de aceptación de esta Recomendación, sean capacitados los elementos de seguridad y custodia del Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas, particularmente **AR1** y **AR2** ((...)), en temas relativos a la protección y respeto a los derechos humanos y uso de la fuerza pública, derecho a la integridad personal, en su modalidad de integridad física, así como al derecho a la alimentación, ambos en relación con el deber del Estado garante de las personas privadas de su libertad, para que en lo sucesivo se conduzcan en su actuar laboral con apego y respeto a la legalidad. Debiendo remitir a este Organismo protector de los derechos humanos, las constancias que acrediten su cumplimiento.

QUINTA. Dentro de un plazo máximo de un mes, contados a partir de aceptación de esta Recomendación, se establezcan mecanismos dirigidos a detectar y registrar ingresos de personas privadas de la libertad, posterior a la hora del último alimento del día, con la finalidad de que reciban alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, adecuada para la protección de su salud.

SEXTA. Dentro de un plazo máximo de seis meses, contado a partir de la aceptación de esta Recomendación, se implemente una campaña de sensibilización, dirigida al personal del Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas, para efectos de

que el ejercicio de sus actividades de seguridad y custodia, sea realizada en el más estricto apego a los derechos humanos de la población penitenciaria, para lo cual deberá remitir las constancias respectivas a este Organismo para acreditar su cumplimiento.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 53, párrafo segundo de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, se hace del conocimiento de la autoridad a la que va dirigida esta Recomendación, que dispone de un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente en que ésta se les notifique, para que manifieste si la acepta o no, en el entendido de que, de no aceptarla, su respuesta se hará del conocimiento de la opinión pública. En caso de que la acepte, se le notifica que dispone de un plazo de 15 días, contados a partir del vencimiento del término del que disponía para responder sobre la aceptación, a fin de enviar las pruebas de su cumplimiento.

Por último, hágasele saber a la parte quejosa que, de conformidad con el artículo 61 de la Ley de este Organismo, dispone de 30 días naturales, computados a partir de la fecha de notificación del presente documento, para que en caso de que exista inconformidad con la misma, interponga el recurso de impugnación correspondiente ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Así lo determina y firma

DRA. EN D. MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOS
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE ZACATECAS

Expediente: CDHEZ/081/2020

Parte quejosa: Q1, persona privada de su libertad en el Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas.

Parte agraviada: Q1, persona privada de su libertad en el Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas.

Autoridad Responsable: Lic. Indira Rodríguez García, Defensora Pública, adscrita al Instituto de la Defensoría Pública del Estado.

Derechos Humanos violados:
I. Derecho al debido proceso, en su modalidad de derecho a una defensa técnica adecuada.

Zacatecas, Zacatecas, a 27 de agosto de 2021, una vez concluida la investigación de los hechos que motivaron el expediente CDHEZ/081/2020, y analizado el proyecto presentado por la Segunda Visitaduría General, la suscrita aprobó, de conformidad con los artículos 4, 8 fracción VIII, 17 fracción V, 37, 51, 53 y 56 de la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, en relación con lo dispuesto por los numerales 161, fracción X, 166, 167, 168 y 169, del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, la **Recomendación 44/2021** que se dirige a las autoridades siguientes:

MTRA. LETICIA PACHECO MACÍAS, Directora General del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Zacatecas.

R E S U L T A N D O;

I. DE LA CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

1. De conformidad con los artículos 6°, apartado A., fracción II y 16, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 23 y 85 de la Ley de Trasparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, los datos personales del agraviado, así como aquellos relativos a la vida privada y familiar, relacionadas con esta resolución, permanecen confidenciales, ya que éstos no son públicos.

II. RELATORÍA DE LOS HECHOS Y OBJETO DE LA CONTROVERSIA.

1. El 17 de febrero de 2020, **Q1**, persona privada de su libertad en el Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas, de conformidad con los artículos 30, 31 y 32 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, presentó queja en contra de la **LIC. INDIRA RODRÍGUEZ GARCÍA**, Defensora Pública adscrita al Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Zacatecas, por actos presuntamente violatorios de sus derechos humanos.

Por razón de turno, el 19 de febrero de 2020, se remitió el escrito de queja a la Segunda Visitaduría, bajo el número de expediente CDHEZ/081/2020, a efecto de formular el correspondiente acuerdo de calificación, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 123 y 124 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas.

El 21 de febrero de 2020, la queja se calificó como una presunta violación al derecho al debido proceso, en su modalidad de derecho a una defensa técnica adecuada, de conformidad con lo establecido por el artículo 124, fracción I, del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas.

2. Los hechos materia de la queja consistieron en lo siguiente:
El **C. Q1** señaló que, se instruyó en su contra la Causa Penal 699/2018 por el delito de secuestro agravado, cometido en perjuicio de dos personas mayores de edad de identidad reservada, donde fue dictada sentencia definitiva en su contra, para lo cual, la **LIC. INDIRA RODRÍGUEZ GARCÍA**, Defensora Pública adscrita al Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Zacatecas, interpuso el recurso de apelación, sin embargo, esto lo realizó fuera del término legal, con lo cual, lo ha dejado en estado de indefensión, vulnerando con ello, su derecho fundamental a una defensa adecuada.

3. Informes de las autoridades involucradas:
- El 26 de febrero de 2020, se solicitó informe de autoridad, a la **LIC. INDIRA RODRÍGUEZ GRACÍA**, Defensora Pública adscrita al Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Zacatecas.

III. COMPETENCIA.

1. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas es competente, en los términos de los artículos 1º, 4º, 6º, 8º fracción VII, inciso A) y 31 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, en relación con los numerales 15, 22 y 23, de su Reglamento Interno, en razón de que la queja se promueve en contra de una servidora pública adscrita al Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Zacatecas.

2. De conformidad con los artículos 123 y 124, fracción I, del Reglamento Interior de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, este Organismo advierte que, de los hechos narrados por la parte agraviada, se puede presumir la violación de los derechos humanos de **Q1**, persona privada de su libertad en el Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas, así como la responsabilidad de la servidora pública estatal señalada.

3. Esta Comisión presumió la violación a los siguientes derechos:
a) Derecho al debido proceso, en su modalidad de derecho a una defensa técnica adecuada.

IV. PROCEDIMIENTO ANTE LA COMISIÓN.

Con la finalidad de documentar las presuntas violaciones a derechos humanos, así como para determinar la existencia o no de responsabilidad de la Defensora Pública adscrita al Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Zacatecas, este Organismo realizó entrevistas a las personas relacionadas con los hechos; se solicitaron informes a las autoridades señaladas como responsables, así como informes en vía de colaboración.

V. PRUEBAS.

Con base en lo estipulado en los artículos 48 y 49 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, en relación con los numerales 150, 151, 152, 153 y 154 del Reglamento Interior de este Organismo, durante el procedimiento realizado por esta Institución se recabaron los elementos probatorios documentales, remitidos por la parte quejosa, así como las declaraciones que a continuación se detallan:

VI. SOBRE LOS DERECHOS VULNERADOS.

A) Derecho al debido proceso, en su modalidad de derecho a una defensa técnica adecuada.

1. El debido proceso se refiere a “las condiciones, requisitos, elementos o circunstancias previas a que debe sujetarse la autoridad para generar una afectación válida en la esfera del gobernado, de acuerdo con las cuales es necesario que medie un procedimiento en el cual sea oído y vencido, resolviéndose fundada y motivadamente sobre todos los puntos litigiosos materia del debate.[1]

2. El Derecho a un debido proceso legal, se entiende como “el derecho de toda persona a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la substanciación de cualquier acusación penal formulada en su contra o para la determinación de sus derechos de carácter civil, laboral, fiscal u otro cualquiera.[2]

3. En ese sentido, “[b]usca confirmar la legalidad y correcta aplicación de las leyes dentro de un marco de respeto mínimo a la dignidad humana dentro de cualquier tipo de proceso, entendido éste como “aquella actividad compleja, progresiva y metódica, que se realiza de acuerdo con reglas preestablecidas, cuyo resultado será el dictado de la norma individual de conducta (sentencia), con la finalidad de declarar el derecho material aplicable al caso concreto”[3].

4. En el marco normativo del Sistema Universal de Protección a los Derechos Humanos, los principios y garantías del debido proceso, se encuentran regulados en los artículos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que establece: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley” y 10 que señala que, “toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones, o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal”.

5. En el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, se encuentran reconocidos en su artículo 2.3 que establece que, cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar que: a) toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente Pacto hayan sido violados podrá interponer un recurso efectivo, aún cuando tal violación hubiere sido cometida por personas que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales; b) la autoridad competente, judicial, administrativa o legislativa, o cualquier otra autoridad competente prevista por el Sistema legal del Estado, decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso, y desarrollará las posibilidades de recurso judicial; c) las autoridades competentes cumplirán toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. También dispone en su artículo 14.1 que todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil.”

6. En relación al Sistema Interamericano, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, se contempla el Derecho de Justicia establecido en su artículo XVIII. “Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. Asimismo, debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos-- fundamentales consagrados constitucionalmente”.

---

1 Tesis 2ª/J 24/2011 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, T, XXXIII, febrero de 2011. p. 1254. Reg. IUS 162.708.

2 Artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Cf. Corte I.D.H. Caso Genie Lacayo. Sentencia de 29 de enero de 1997, párr.. 74.

3 “El debido proceso legal y la Convención Americana sobre Derechos Humanos”. Víctor Manuel Rodríguez Rescia, p.1295. (Arazi (Roland), Derecho Procesal civil y comercial. 2da. Edición. Bs. As., Astrea, 1995, p. 111.

7. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, por su parte reconoce el Derecho al Debido Proceso, en su artículo 8 que señala: “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la substanciación de cualquier acusación penal, formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos u obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”. Así como en su artículo 25. “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.”

8. En relación la citada Convención, ha establecido principios que señala, deben entenderse como “*un cuerpo mínimo de garantías al debido proceso que deben respetarse por todos los Estados que hayan ratificado la Convención Americana”.* En ese sentido los estados en su legislación interna pueden disponer de mayores garantías procesales, pero no de menores a las en ella previstas.

9. En esas circunstancias la defensa adecuada forma parte del debido proceso, para lo cual, la Declaración Universal de Derechos Humanos, establece en su artículo 11.1, que “[t]oda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa.”[4]

10. En ese sentido, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, precisa en su artículo XXVI, que “[t]oda persona acusada de delito tiene derecho a ser oída en forma imparcial y pública, a ser juzgada por tribunales anteriormente establecidos de acuerdo con leyes preexistentes y a que no se le imponga penas crueles, infamantes o inusitadas.”[5] De la misma forma, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 14.3, inciso b), establece que, “[d]urante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:”[6] “A disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa y a comunicarse con un defensor de su elección”[7]

11. La Convención Americana de Derechos Humanos, en el artículo 8.2, incisos d) y e), señala que “[t]oda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:”[8] “derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor” y “derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley.”[9]

12. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el “Caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México”, Sentencia de 26 de noviembre de 2010, estableció en su párrafo 154, que “el derecho a la defensa debe poder ejercerse desde que se señala a una persona como posible autor o partícipe de un hecho punible y sólo culmina cuando finaliza el proceso, incluyendo, en su caso, la etapa de ejecución de la pena. Impedir que la persona ejerza su derecho de defensa desde que se inicia la investigación en su contra y la autoridad dispone o ejecuta actos que implican afectación de derechos es potenciar los poderes investigativos

---

4 Declaración Universal de Derechos Humanos, https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/#:~:text=La%20Declaraci%C3%B3n%20Universal%20de%20los,historia%20de%20los%20derechos%20humanos.&text=La%20Declaraci%C3%B3n%20establece%2C%20por%20primera,a%20m%C3%A1s%20de%20500%20idiomas., fecha de consulta 25 de agosto de 2020.

5 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/declaracion.asp#:~:text=Art%C3%ADculo%20I.,la%20seguridad%20de%20su%20persona.&text=Todas%20las%20personas%20son%20iguales,idioma%2C%20credo%20ni%20otra%20alguna., fecha de consulta 25 de agosto de 2020.

6 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/ccpr.aspx, fecha de consulta 25 de agosto de 2020.

7 Ídem.

8 Convención Americana sobre Derechos Humanos, https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm, fecha de consulta 26 de agosto de 2020.

9 Ídem.

del Estado en desmedro de derechos fundamentales de la persona investigada. El derecho a la defensa obliga al Estado a tratar al individuo en todo momento como un verdadero sujeto del proceso, en el más amplio sentido de este concepto, y no simplemente como objeto del mismo.”[10]

13. Por su parte, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 20, inciso B, fracción VIII, precisa que toda persona imputada “[t]endrá derecho a una defensa adecuada por abogado, al cual elegirá libremente incluso desde el momento de su detención. Si no quiere o no puede nombrar un abogado, después de haber sido requerido para hacerlo, el juez le designará un defensor público. También tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera”.[11]

14. Asimismo, el Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 17, señala que, “[l]a defensa es un derecho fundamental e irrenunciable que asiste a todo imputado, no obstante, deberá ejercerlo siempre con la asistencia de su Defensor o a través de éste. El Defensor deberá ser licenciado en derecho o abogado titulado, con cédula profesional.”[12] De manera concordante, el artículo 113, fracción XI, del mismo ordenamiento legal, establece que, “[e]l imputado tendrá los siguientes derechos:”[13] “A tener una defensa adecuada por parte de un licenciado en derecho o abogado titulado, con cédula profesional, al cual elegirá libremente incluso desde el momento de su detención y, a falta de éste, por el Defensor público que le corresponda, así como a reunirse o entrevistarse con él en estricta confidencialidad.”[14]

15. En ese contexto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido en el criterio jurisprudencial “**DEFENSA ADECUADA EN SU VERTIENTE MATERIAL. DIRECTRICES A SEGUIR PARA EVALUAR SI ESTE DERECHO HA SIDO VIOLADO**, que “[e]n virtud de que el órgano jurisdiccional durante el procedimiento penal se encuentra obligado a cerciorarse de que el derecho a gozar de una defensa adecuada no se torne ilusorio a través de una asistencia jurídica inadecuada, es procedente que los juzgadores evalúen la defensa proporcionada por el abogado. Por lo anterior, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que para determinar si el citado derecho en su vertiente material fue violado, dado que no toda deficiencia o error en la conducción de la defensa implica dicha vulneración, el juzgador debe seguir las siguientes directrices: a) analizar que las supuestas deficiencias sean ajenas a la voluntad del imputado y corresponden a la incompetencia o negligencia del defensor y no a una intención del inculpado de entorpecer o evadir indebidamente el proceso; b) evaluar que las fallas de la defensa no sean consecuencia de la estrategia defensiva del abogado, valorando las cuestiones de hecho más que de fondo para enfocarse principalmente en la actitud del abogado frente al proceso penal; y, c) valorar si la falta de defensa afectó en el sentido del fallo en detrimento del inculpado tomando en consideración caso por caso al apreciar el juicio en su conjunto. Ahora bien, si después de realizar esta tarea evaluativa el Juez determina que alguna de las citadas fallas resultó en la vulneración del derecho del imputado a contar con una defensa adecuada en su vertiente material, tendrá la obligación de informarle tal circunstancia con la finalidad de otorgarle la posibilidad de decidir si desea cambiar de abogado, ya sea que él nombre a uno particular, se le asigne uno de oficio, o continuar con su mismo defensor; si éste opta por cambiar de abogado, el Juez deberá otorgar tiempo suficiente para preparar nuevamente su defensa y poder subsanar las fallas o deficiencias de la defensa anterior. Por otro lado, si decide mantener a su defensor particular, el Juez nombrará un defensor público para que colabore en la defensa y pueda evitarse que se vulneren sus derechos.”[15]

16. En el caso de estudio, la persona privada de su libertad, **Q1**, se duele de una defensa inadecuada, atribuible a la **LIC. INDIRA RODRÍGUEZ GARCÍA**, Defensora Pública adscrita

---

10 CrIDH, “Caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México”, Sentencia de 26 de noviembre de 2010, párrafo 154.

11 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_080520.pdf, fecha de consulta 26 de agosto de 2020.

12 Código Nacional de Procedimientos Penales, http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CNPP_220120.pdf, fecha de consulta 25 de agosto de 2020.

13 Ídem.

14 Ídem.

15 Tesis: 1a. CI/2019 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Noviembre de 2019, T. I, registro 2021097.

al Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Zacatecas, en virtud de haber omitido presentar en tiempo el Recurso de Apelación, en contra de la Sentencia Definitiva recaída dentro de la causa penal […] que se instruyó en su contra, por el delito de secuestro agravado, cometido en perjuicio de dos personas mayores de edad.

17. Al señalar que, mediante auto de fecha 14 de noviembre de 2019, dictado por la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, se desprende que, en relación al Recurso de Apelación interpuesto en contra de la Sentencia Definitiva, de fecha 27 de agosto de 2019, dictada en su contra por el delito de secuestro agravado, éste no reúne el requisito de temporalidad, teniendo consideración que la sentencia fue notificada personalmente a la **LIC. INDIRA RODRÍGUEZ GARCÍA**, Defensora Pública adscrita al Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Zacatecas, en fecha 27 de agosto de 2019, por lo que, el computo para la interposición del recurso, comenzó a correr a partir del 28 de agosto de 2019, concluyendo el 10 de septiembre del mismo año, sin embargo, la defensora pública presentó el recurso hasta el 11 de septiembre de 2019, es decir, fuera término.

18. Sobre el particular, la **LIC. INDIRA RODRÍGUEZ GARCÍA**, Defensora Pública adscrita al Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Zacatecas, en su informe de autoridad reconoció haber ejercido la defensa de **Q1**, dentro de la causa penal marcada con el número 699/2018, en la que recayó sentencia definitiva en fecha 27 de agosto del año 2019. Asimismo, haber presentado el Recurso de Apelación el 11 de septiembre de 2019, argumentando en su defensa que, el oficial Notificador del Tribunal Superior de Justicia del Estado, le notificó la resolución el día 28 de agosto de 2019, y no así, el 27 de agosto de ese año; y que, dicho funcionario se condujo con deslealtad, porque asentó que la notificación de la sentencia se realizó el día 27 de agosto de 2019, considerando que, su único error fue no haber detectado dicha eventualidad.

19. En esas circunstancias, esta Comisión recabó copia debidamente certificada del auto de fecha 14 de noviembre de 2019, emitido por la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, dentro del Toca Penal Oral […], donde se puede observar que, efectivamente, el Recurso de Apelación interpuesto en contra de la Sentencia Definitiva de fecha 27 de agosto de 2019, dictada dentro de la Causa Penal […], instruida en contra de **Q1** por el delito de secuestro agravado, cometido en agravio de dos personas del sexo masculino mayores de edad, no reunió el requisito de temporalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 470, fracción I y 475 del Código Nacional de Procedimiento Penales, y por ende, se declaró inadmisible para todos sus efectos legales.

20. De la misma forma, este Organismo, recabó copia certificada de la notificación personal realizada por el **LIC. SALVADOR FRAGOZA CORTÉS**, Notificador del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, a la **LIC. INDIRA RODRÍGUEZ GARCÍA**, Defensora Pública adscrita al Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Zacatecas, que tiene los efectos de prueba plena, al tratarse de una documental pública, en la que se puede apreciar que, ésta se realizó a las 13:00 horas del 27 de agosto de 2019, en la cual, se le hace del conocimiento que la sentencia que se le notifica es recurrible en términos del artículo 468, fracción II, del Código Nacional de Procedimientos Penales, disponiendo para ello, del término de 10 días para hacerlo, de acuerdo a lo previsto por el numeral 471 del mismo ordenamiento legal.

21. Esto es, en la referida notificación, se observa que se encuentra plasmado el nombre y la rúbrica de la **LIC. INDIRA RODRÍGUEZ GARCÍA**, Defensora Pública adscrita al Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Zacatecas, por lo que, en ese sentido, el argumento de la servidora pública, donde sostiene que el **LIC. SALVADOR FRAGOZA CORTÉS**, Notificador del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, asentó la fecha de notificación con un día anterior a la que en realidad realizó, no encuentra sustento, máxime, porque es una obligación que tiene como defensora pública, verificar todo tipo de notificaciones y, en especial, aquellas que conllevan realizar alguna manifestación, dentro de un plazo determinado, con lo cual, se encuentra de manifiesto que, la servidora pública se conduce con falsedad ante este Organismo Defensor de Derechos Humanos.

22. En esa tesitura, esta Comisión advierte que, la **LIC. INDIRA RODRÍGUEZ GARCÍA**, Defensora Pública adscrita al Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Zacatecas, efectivamente omitió interponer en tiempo, el Recurso de Apelación en contra de la Sentencia Definitiva de fecha 27 de agosto de 2019, dictada dentro de la Causa Penal 699/2018, instruida en contra de **Q1**, como parte de su obligación a realizar una defensa adecuada.

23. Ya que no debemos olvidar que, el derecho a la defensa adecuada en materia penal está previsto, entre otros ordenamientos, en los artículos 14, apartado 3, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 8, apartado 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 20, apartado B, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, que, conforme a las normas enunciadas, la defensa adecuada es una garantía judicial mínima de toda persona imputada por un delito, la cual es indispensable para que exista un debido proceso penal. Esto, porque la defensa adecuada representa un derecho instrumental cuya finalidad es garantizar que el poder punitivo del Estado se despliegue a través de un conjunto sucesivo de actuaciones que permitan a la persona acusada defender sus intereses con igualdad de armas que su acusador, asegurando a la postre el dictado de una sentencia que cumpla con los requisitos, valores y principios legales y constitucionales que definen a los procedimientos penales[16].

24. La defensa adecuada en materia penal es un derecho que se garantiza de manera plena y efectiva cuando se ejerce en todas las etapas de un procedimiento de esa naturaleza, sin excepción alguna, con el acompañamiento de un abogado, que por tener el carácter de profesionista en derecho, de inicio, se presume que está en condiciones de apreciar lo que jurídicamente es conveniente para la persona que hace frente a una acusación y proporcionarle la asesoría técnica jurídica necesaria para que responda a la imputación que se formula en su contra.[17]

25. En esos asuntos el Tribunal Pleno determinó que la defensa adecuada en materia penal implica que la asistencia jurídica para la persona imputada debe ser técnica, esto es, debe ser brindada por un perito en derecho, además, precisó que la defensa efectiva se garantiza cuando es proporcionada por una tercera persona que posee los conocimientos técnicos en derecho, suficientes para actuar de manera diligente, con el fin de proteger los derechos procesales de la persona imputada. Y que esa diligencia opera en dos sentidos: uno formal, relativo a que el defensor demostrara ser perito en derecho; y uno material, consistente en que, además, el defensor actuara cuidadosa y activamente, con el fin de proteger las garantías procesales del acusado y evitar así que sus derechos sean lesionados injustificadamente.

26. A partir del criterio del máximo Tribunal de este país, la Primera Sala ha señalado que la constatación del elemento formal de la defensa técnica, es decir, la acreditación de ser licenciado en derecho, no puede presumirse, sino que debe quedar plenamente acreditada[18]; y el material, consistente en la actuación diligente, requiere una participación activa del profesional jurídico en toda diligencia en que se encuentren involucrados los derechos de la persona imputada[19]

27. En suma, la defensa técnica que proporciona una persona con conocimientos jurídicos es una garantía específica del derecho a la defensa adecuada, la cual, a su vez, como

---

16 “DEFENSA ADECUADA EN MATERIA PENAL. ALCANCES Y MOMENTO A PARTIR DEL CUAL SE ACTUALIZA ESTE DERECHO FUNDAMENTAL.” [Décima Época. Registro: 2003959. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXII, Julio de 2013, Tomo 1. Materia(s): Constitucional. Página: 554].

17 Véase la jurisprudencia 1a./J. 26/2015 (10a.), de esta Primera Sala, de voz: “DEFENSA ADECUADA EN MATERIA PENAL. LA FORMA DE GARANTIZAR EL EJERCICIO EFICAZ DE ESTE DERECHO HUMANO SE ACTUALIZA CUANDO EL IMPUTADO, EN TODAS LAS ETAPAS PROCEDIMENTALES EN LAS QUE INTERVIENE, CUENTA CON LA ASISTENCIA JURÍDICA DE UN DEFENSOR QUE ES PROFESIONISTA EN DERECHO.” [Décima Época. Registro: 2009005. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 18, Mayo de 2015, Tomo I. Materia(s): Constitucional, Penal. Página: 240].

18 Al respecto, consúltese la tesis: “DEFENSA TÉCNICA. NO DEBE PRESUMIRSE POR EL HECHO DE QUE SE ASIENTE EN LA DECLARACIÓN MINISTERIAL DE UN INCULPADO QUE QUIEN LO ASISTE ES DEFENSOR DE OFICIO, SI NO EXISTE SUSTENTO ALGUNO DE ESA CALIDAD.” [Décima Época. Registro: 2010350. Primera Sala. Tesis aislada. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo I. Materia(s): Constitucional. Tesis: 1a. CCCXXVIII/2015 (10a.). Página: 966].

19 Así se reflejó en la tesis aislada P. XII/2014 (10a.), del Tribunal Pleno, que lleva por rubro: “DEFENSA ADECUADA DEL INCULPADO EN UN PROCESO PENAL. SE GARANTIZA CUANDO LA PROPORCIONA UNA PERSONA CON CONOCIMIENTOS TÉCNICOS EN DERECHO, SUFICIENTES PARA ACTUAR DILIGENTEMENTE CON EL FIN DE PROTEGER LAS GARANTÍAS PROCESALES DEL ACUSADO Y EVITAR QUE SUS DERECHOS SE VEAN LESIONADOS.” [Décima Época. Registro: 2006152. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, Abril de 2014, Tomo I. Materia(s): Constitucional. Página: 413].

componente del debido proceso, permite que los asuntos del orden penal sean acordes a la tutela jurisdiccional efectiva, pues para que éstos cumplan realmente con el objetivo para el que están diseñados, es necesario que la persona acusada sea asistida por un profesional jurídico, en todas las etapas en las que se desarrolla el procedimiento, a efecto de que pueda formular de la mejor manera posible los planteamientos en los que se sustenta la defensa de sus intereses y hacer frente a la acusación del Estado.

28. Dicho con otras palabras, la defensa que presta un especialista en derecho a la persona imputada, no sólo le ayuda a proteger y hacer que se respeten sus derechos, sino que también constituye una garantía de que el procedimiento penal cumplirá efectivamente la función, requisitos, valores y principios que lo definen.

29. Ahora bien, el derecho a la defensa adecuada, y puntualmente la defensa técnica, según lo ha señalado esta Sala, además de que debe observarse en todo el procedimiento penal –segunda instancia incluida, con independencia de su denominación formal–, impone a las autoridades que intervienen, por lo menos, dos tipos de obligaciones: una positiva (o de hacer) en el sentido de facilitar todas las condiciones que permitan la defensa adecuada, así como verificar que toda persona imputada sea asistida por un abogado que formalmente acredite serlo y materialmente desempeñe la profesión con diligencia; y una negativa (de no interferir), consistente en la prohibición de obstaculizar las acciones defensivas de la persona acusada[20] .

30. La obligación positiva descrita demanda de las autoridades que intervienen en el procedimiento penal, el deber de proporcionar los medios para facilitar la defensa, por ejemplo, la asignación de un defensor público, cuando la persona imputada no quiera o no pueda costearse los servicios de un abogado; pero también, de verificar que el profesionista que asiste a la persona imputada, en efecto, sea licenciado en derecho con cédula profesional y ejecute acciones que razonablemente puedan ser consideradas pertinentes en la defensa de los intereses de su representado.

31. En cuanto a la obligación negativa, las autoridades penales tienen vedado oponerse, obstruir, ocultar, desvanecer cualquier elemento al que la persona imputada legalmente pudiera recurrir para ejercer adecuadamente la defensa de sus intereses, como podría ser, por ejemplo: la provisión de un abogado, las pruebas y datos que obran en su contra, entre otras cuestiones.

32. Resumiendo, la defensa adecuada es de capital importancia porque permite a la persona imputada la protección de sus intereses y el respeto de sus derechos a través de una persona con conocimientos especializados en la ciencia jurídica, garantiza en mayor medida que el procedimiento penal cumplirá efectivamente con los valores y principios para los que fue diseñado, y por último, demanda de las autoridades una actitud facilitadora y no obstaculizadora para que la defensa esté cubierta en todo momento.

33. En ese contexto, y en especial, respecto al caso de estudio, donde el quejoso se duele de la omisión por parte de la **LIC. INDIRA RODRÍGUEZ GARCÍA**, Defensora Pública adscrita al Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Zacatecas, de interponer en tiempo, el recurso de apelación en contra de la sentencia que lo condena, es importante señalar que, la apelación es un genuino recurso procesal, cuyo objeto es que un tribunal diferente, independiente e institucionalmente superior, revise que la sentencia emitida en la audiencia de juicio oral de un procedimiento penal no desconozca los extremos previstos en la propia ley, en el que además se proporcionan los medios para que la persona que lo interpone logre con alto grado de probabilidad ese propósito.

34. Al respecto, el Tribunal Pleno, al fallar la acción de inconstitucionalidad 22/2009, reconoció que el derecho de acceso a los recursos en materia penal es absoluto, según normas internacionales que exigen que todo fallo condenatorio pueda ser recurrido ante un juez o tribunal superior, y que dicho derecho impone al legislador la obligación de articular un

---

20 Consúltese la jurisprudencia 1a./J. 12/2012 (9a.) de esta Primera Sala, relativa al rubro: “DEFENSA ADECUADA. FORMA EN QUE EL JUEZ DE LA CAUSA GARANTIZA SU VIGENCIA.” [Décima Época. Registro: 160044. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro X, Julio de 2012, Tomo 1. Materia(s): Constitucional. Página: 433].

sistema de recursos con requisitos procesales que permitan lograr que la tutela judicial sea efectiva[21]

35. Y ya se ha dicho que los estándares mínimos de un recurso efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implican no sólo el que esté previsto formalmente en la ley, sino que materialmente sea idóneo para lograr el objetivo para el que fue diseñado[22]. Es así, porque se trata de un recurso formalmente previsto en ley, que es capaz de producir el resultado para el que fue concebido (en su caso, anular la sentencia dictada en la audiencia de juicio oral), lo resuelve un tribunal independiente y orgánicamente superior al que dictó el fallo, su interposición se realiza en determinada temporalidad ante el órgano jurisdiccional enjuiciador por lo que es sencilla, y su tramitación es rápida, en tanto que una vez admitido, se cita a una audiencia para debatir las cuestiones planteadas y se emite una resolución en breve término.

36. Adicionalmente, está revestido de herramientas que potencializan su efectividad de frente al fin para el que fue diseñado, entre otras, la que garantiza que la persona que lo promueve esté acompañada por un abogado que le aporte el conocimiento técnico necesario para formular sus pretensiones y defender sus derechos de manera diligente.

37. Actividad procesal que, en el caso concreto, no sucedió por parte la **LIC. INDIRA RODRÍGUEZ GARCÍA**, Defensora Pública adscrita al Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Zacatecas, al no apegarse a la temporalidad prevista por el Código Nacional de Procedimiento Penales, aceptando entonces la sentencia definitiva, emitida por el Tribunal de Juicio Oral, en contra de **Q1**, lo cual, es una decisión propia del acusado y no del defensor. Ya que el hecho de presentar el recurso de apelación de forma extemporánea, deja al quejoso sin la posibilidad de que, un tribunal superior a aquel que resolvió en primera instancia, estudie, analice y determine si la sentencia emitida por éste, se confirma, modifica o revoca.

38. En ese entendido, la **LIC. INDIRA RODRÍGUEZ GARCÍA**, Defensora Pública adscrita al Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Zacatecas, además de incumplir con su obligación dentro del procedimiento judicial, también ha incumplido con lo dispuesto por los artículos 14, fracción I, 36, fracción III y 37, fracción V, de la Ley del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Zacatecas, los cuales establecen:

> **Artículo 14**
> El Instituto tendrá las siguientes facultades y atribuciones:
>
> I. Defender jurídicamente en las materias penal y laboral, en cualquier etapa del procedimiento, a las personas que lo soliciten, principalmente a aquellas de escasos recursos y de mayor marginación social y cuando, a falta de un defensor, el Ministerio Público, el Juez o la autoridad laboral lo soliciten, a fin de garantizarles una adecuada defensa y protección de sus derechos;
>
> […]
>
> **Artículo 36**
> Para el desempeño de sus funciones los defensores públicos, procuradores y asesores jurídicos, tendrán las siguientes obligaciones:
>
> […]
> III. Dar seguimiento a los asuntos asignados, observando el estado procesal que guarda, así como substanciar los recursos y medios de defensa que el caso amerite;
>
> **Artículo 37**
> Los defensores públicos de la materia penal tendrán las obligaciones siguientes:

---

21 Ut supra citada, pp. 56 y 57. Sobre el punto, existió unanimidad de once votos en cuanto a la propuesta modificada del considerando Cuarto, análisis de fondo, en el sentido de reconocer la validez de los artículos 1339 y 1340 del Código de Comercio, con las salvedades de los Ministros Aguirre Anguiano, Luna Ramos y Presidente Ortiz Mayagoitia, en cuanto a la existencia de un derecho a los recursos. El señor Ministro Franco González Salas reservó su derecho para formular voto concurrente.
22 Ver, por todas, la sentencia emitida por la Corte IDH en el caso Reverón Trujillo vs. Venezuela y la tesis 1a. CXCVIII/2014 (10a.)

> […]
> V. Interponer los recursos e incidentes que procedan y, en su caso, el juicio de amparo; y[23]

39. De acuerdo con lo anterior, esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, advierte una violación al debido proceso, en su modalidad de derecho a una defensa técnica adecuada cometida en agravio de la persona privada de su libertad, **Q1**, atribuible a la **LIC. INDIRA RODRÍGUEZ GARCÍA**, Defensora Pública adscrita al Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Zacatecas, en virtud de haber incumplido con lo dispuesto por los artículos en los artículos 14, apartado 3, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 8, apartado 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 20, apartado B, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 14, fracción II, 36, fracción III y 37, fracción V, de la Ley del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Zacatecas, en relación con el numeral 54, fracción IV, del dispositivo legal invocado, cuando señala que, los servidores públicos adscritos al Instituto serán sujetos de responsabilidad, cuando omitan o demoren sin justificación, la interposición de recursos legales en los procedimientos en los que intervengan.

VII. CONCLUSIONES DEL CASO.

1. Esta Comisión rechaza la vulneración del derecho al debido proceso en su modalidad del derecho a una defensa adecuada de la persona privada de su libertad, **Q1**, por la omisión en que incurrió la **LIC. INDIRA RODRÍGUEZ GARCÍA**, Defensora Pública adscrita al Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Zacatecas, al presentar el Recurso de Apelación contra la Sentencia Definitiva de fecha 27 de agosto de 2019, dictada dentro de la Causa Penal 699/2018, fuera del término de diez los días siguientes a la notificación de la resolución impugnada, de conformidad con lo previsto en el artículo 471, párrafo segundo, del Código Nacional de Procedimiento Penales; debido a que la defensora pública, presentó el Recurso de Apelación hasta el 11 de septiembre de 2019, cuando el cómputo de los diez días siguientes a la notificación de la sentencia, realizada en fecha 27 de agosto de 2019, feneció el 10 de septiembre de 2019.

VIII. REPARACIONES.

1. De conformidad con lo establecido en los artículos 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 51 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, al acreditarse violación a los derechos humanos de **Q1**, persona privada de su libertad en el Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas, atribuible a la servidora pública estatal del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Zacatecas, la Recomendación formulada al respecto, debe incluir las medidas que procedan para lograr la efectiva restitución de las personas afectadas en sus derechos.

2. Dichas reparaciones, de conformidad con los Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, en su resolución aprobada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidad el 16 de diciembre de 2005, establece que “[u]na reparación adecuada, efectiva y rápida tiene por finalidad promover la justicia, remediando las violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos o las violaciones graves del derecho internacional humanitario.”[24] Para ello, “[l]a reparación ha de ser proporcional a la gravedad de las violaciones y al daño sufrido”[25]; esto es, “…una

---

23 Ley del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Zacatecas, https://www.congresozac.gob.mx/63/ley&cual=205&tipo=pdf, fecha de consulta 13 de agosto de 2021.

24 ONU Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, en su 60/147 Resolución aprobada por la Asamblea General el 16 de diciembre de 2005, http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/RemedyAndReparation.aspx, fecha de consulta 11 de octubre de 2017, párr. 15.

25 Ídem.

reparación plena y efectiva…", "…en las formas siguientes: restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición."[26]

A) De la indemnización.
1. La indemnización es una medida compensatoria que busca reparar los perjuicios económicamente evaluables que sean consecuencia de las violaciones a derechos humanos, entre los que se incluyen: el daño físico o mental; la pérdida de oportunidades, en particular las de empleo, educación y prestaciones sociales; los daños materiales y la pérdida de ingresos, incluido el lucro cesante; los perjuicios morales; los gastos de asistencia jurídica o de expertos, medicamentos y servicios médicos, psicológicos y sociales.

2. En el caso motivo de esta Recomendación, resulta procedente el pago de una indemnización, por la afectación económica causada a la persona privada de su libertad, **Q1**, en su calidad de víctima directa, a razón de los gastos que tiene que erogar por la contratación de un abogado particular, del cual, ha requerido sus servicios con la finalidad de procurar revertir la inadmisibilidad del recurso de apelación, que no fue procedente, la omisión de la servidora pública.

B) De las medidas de satisfacción.
1. La satisfacción cuando sea pertinente y procedente deberá incluir la totalidad o parte de las medidas siguientes:

a) Medidas eficaces para conseguir que no continúen las violaciones;
b) La verificación de los hechos y la revelación pública y completa de la verdad, en la medida en que esa revelación no provoque más daños o amenace la seguridad y los intereses de la víctima, de sus familiares, de los testigos o de personas que han intervenido para ayudar a la víctima o impedir que se produzcan nuevas violaciones;
c) La búsqueda de las personas desaparecidas, de las identidades de los niños secuestrados y de los cadáveres de las personas asesinadas, y la ayuda para recuperarlos, identificarlos y volver a inhumarlos según el deseo explícito o presunto de la víctima o las prácticas culturales de su familia y comunidad;
d) Una declaración oficial o decisión judicial que restablezca la dignidad, la reputación y los derechos de la víctima y de las personas estrechamente vinculadas a ella;
e) Una disculpa pública que incluya el reconocimiento de los hechos y la aceptación de responsabilidades;
f) **La aplicación de sanciones judiciales o administrativas a los responsables de las violaciones**;
g) Conmemoraciones y homenajes a las víctimas;
h) **La inclusión de una exposición precisa de las violaciones ocurridas en la enseñanza de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, así como en el material didáctico a todos los niveles**.[27]

2. Estas medidas contemplan la verificación de los hechos y la relevación de la verdad, así como aplicación de sanciones jurídicas o administrativas a los responsables de las violaciones. Por lo anterior, se requiere que el Órgano Interno de Control del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Zacatecas, proceda a realizar la investigación administrativa que corresponda, a fin de determinar la responsabilidad y sanción específica a la que se haya hecho acreedora la **LIC. INDIRA RODRÍGUEZ GARCÍA**, Defensora Pública adscrita al Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Zacatecas, que vulneraron los derechos humanos de la persona privada de su libertad, **Q1**, en su calidad de víctima directa.

C) De las garantías de no repetición.

---

26 Ibídem, párr. 18.
27 Ídem, párr. 22.

1. Son aquellas que se adaptan con el fin de evitar que las víctimas vuelvan a ser objeto de violaciones a sus derechos y para contribuir a prevenir o evitar la repetición de actos de la misma naturaleza.

2. A fin de prevenir la violación de los derechos mencionados en párrafos precedentes, resulta indispensable que el Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Zacatecas, implemente programas de capacitación continua al personal de la Defensoría Pública en Materia Penal, relativos al derecho al debido proceso, en su modalidad de derecho a una defensa técnica adecuada, que deben desempeñar como defensores públicos, a favor de las personas imputadas, acusadas y sentenciadas.

RECOMENDACIONES.

Por lo anterior, y con fundamento en los 1 y 102 apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 2, 3, 4, 8, 17, 37, 51, 53, 54, 56, 57 y 58 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas se emiten las siguientes Recomendaciones:

PRIMERA. En el plazo máximo de un mes, contado a partir de la notificación de la presente Recomendación, se inscriba en el Registro Estatal de Víctimas a **Q1**, persona privada de su libertad, en el Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas, como víctima directa de violaciones a sus derechos humanos. Lo anterior, a efecto de que, en un plazo máximo de un año, contado a partir de la notificación de la presente Recomendación, se garantice su acceso oportuno al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, previsto en la Ley de Atención a Víctimas del Estado de Zacatecas. Debiendo remitir a este Organismo las constancias con que acrediten su cumplimiento.

SEGUNDA. En un plazo máximo de un mes, contado a partir de la aceptación de la presente Recomendación, se implementen mecanismos para prevenir omisiones legales de esta naturaleza, evitando que el Estado, incumpla con su obligación garante de respeto al debido proceso, en relación a la defensa adecuada que le asiste a las personas imputadas, acusadas y sentenciadas; para prevenir en lo subsecuente, la repetición de este tipo de omisiones.

TERCERA. En un plazo máximo de un mes, contado a partir de la aceptación de la presente Recomendación, se capacite al personal de la Defensoría Pública, y en específico a la **LIC. INDIRA RODRÍGUEZ GARCÍA**, Defensora Pública adscrita al Instituto de la Defensoría Pública del Estado, en Materia Penal, en el derecho al debido proceso, en su modalidad de derecho a una defensa técnica adecuada, a fin de que realicen de manera oportuna, la interposición de los recursos e incidentes que procedan y, en su caso, el juicio de amparo, de las personas imputadas, acusadas y sentenciadas.

CUARTA. En un plazo no mayor a tres meses, se implementen los mecanismos de actualización y formación profesional continua en materia penal, así como la capacitación en materia de Derechos Humanos que les permita identificar los derechos y obligaciones a los que tienen que ceñirse durante la prestación de su servicio y de las personas a favor de quienes, tienen la obligación de realizar una defensa adecuada.

QUINTA. En un plazo máximo de un mes, contados a partir de la aceptación de la presente Recomendación, se inicie el procedimiento de responsabilidad correspondientes, ante el Órgano Interno de Control del Instituto de la Defensoría Pública del Estado, a fin de que la **LIC. INDIRA RODRÍGUEZ GARCÍA**, Defensora Pública adscrita al Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Zacatecas, responsables de las violaciones a los derechos humanos señalados, sean debidamente sancionados.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 53, párrafo segundo de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, se hace del conocimiento de la autoridad a la que va dirigida esta Recomendación, que dispone de un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente en que ésta se le notifique, para que manifieste si la

acepta o no, en el entendido de que de no aceptarla, su respuesta se hará del conocimiento de la opinión pública. En caso de que la acepte, se le notifica que dispone de un plazo de 15 días, contados a partir del vencimiento del término del que disponía para responder sobre la aceptación, a fin de enviar las pruebas de su cumplimiento.

Por último, hágasele saber al quejoso, el resultado de la presente recomendación y de conformidad con el artículo 61 de la Ley de este Organismo, que dispone de 30 días naturales, computados a partir de la fecha de notificación del presente documento, para que en caso de que exista inconformidad con la misma, interponga el recurso de impugnación correspondiente ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Así lo determina y firma

DRA. EN D. MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOS
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE ZACATECAS

Expediente: CDHEZ/555/2019

Persona quejosa: Q1.

Personas agraviadas: Q1 y A1.

Autoridades responsables:
I. Elementos de la Dirección de Seguridad Pública del municipio de Villanueva, Zacatecas.
II. Jueza Comunitaria, adscrita a la Dirección de Seguridad Pública de Villanueva, Zacatecas.

Derechos Humanos vulnerados:
I. Derecho a la legalidad y seguridad jurídica, en relación con el derecho a no ser objeto de detenciones ilegales y arbitrarias.
II. Derecho a la integridad y seguridad personal, en relación al derecho a la integridad física y psicológica.
III. Derecho a la igualdad y a la no discriminación.

Zacatecas, Zacatecas, a 30 de agosto de 2021, una vez concluida la investigación de los hechos que motivaron el expediente **CDHEZ/555/2019,** y analizado el proyecto presentado por la Cuarta Visitaduría, la suscrita aprobó, de conformidad con los artículos 4, 8 fracción VIII, 17 fracción V, 37, 51, 53 y 56 de la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, en relación con lo dispuesto por los numerales 27, fracción VIII, 40 fracción V, 161 fracción X, 166, 167 y 168 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, la **Recomendación 45/2021** que se dirige a la autoridad siguiente:

M. A. DANIELA CORVERA GONZÁLEZ, Presidenta Municipal de Villanueva, Zacatecas.

R E S U L T A N D O:

I. DE LA CONFIDENCIALIDAD.

1. De conformidad con los artículos 6°, apartado A, fracción II y 16, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 23 y 85 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, los datos personales de los peticionarios y los agraviados, relacionado con esta resolución, permanecerán confidenciales, ya que éstos no son públicos.

2. Asimismo, en términos de lo dispuesto por los artículos 4°, párrafo sexto, 6° fracción II, y 16 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 16 de la Convención de los Derechos del Niño, los nombres, apellidos y demás datos personales de niñas y niños vinculados con los hechos de la presente resolución, se mantienen bajo la mas estricta confidencialidad, en pleno respeto a su derecho a la intimidad y vida privada.

II. RELATORÍA DE LOS HECHOS Y OBJETO DE LA CONTROVERSIA.

1. El 26 de octubre de 2019, el **C. Q1** presentó, de conformidad con los artículos 30, 31 y 32 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, queja en contra

de elementos de la Dirección de Seguridad Pública del municipio de Villanueva, Zacatecas, por actos presuntos violatorios de sus derechos humanos.

Por razón de turno, el 31 de octubre de 2019, se remitió el escrito de queja a la Cuarta Visitaduría, bajo el número de expediente citado al rubro, a efecto de formular el acuerdo de calificación de ésta, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 123 y 124 del Reglamento de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas.

El 04 de noviembre de 2019, la queja se calificó como una presunta violación al derecho a la legalidad y seguridad jurídica, en relación con el derecho a no ser objeto de detenciones arbitrarias, así como al derecho a la integridad y seguridad personal, en relación con el derecho a la integridad física y psicológica, y al derecho a la igualdad y a la no discriminación.

2. Los hechos materia de la queja consistieron en lo siguiente:
El **C. Q1** refirió que, en el acceso a las instalaciones de la feria de Villanueva, Zacatecas, se encontraban elementos de la Dirección de Seguridad Pública, quienes al revisarlo le negaron la entrada, procediendo a su detención. Ante dicha situación, el quejoso les cuestionó la razón de la misma, alegando que él no estaba haciendo nada. Sin embargo, lo esposaron y subieron a la patrulla junto con su hermano **A1**. Una vez que se encontraba a bordo de la patrulla, un **OFICIAL** lo llamó "*maricón", "joto", "pinches jotitos*", y los golpearon.

3. El 20 de noviembre de 2019, el **DOCTOR MIGUEL ÁNGEL TORRES ROSALES**, otrora Presidente Municipal de Villanueva Zacatecas, rindió el informe en relación a los hechos motivo de queja.

III. COMPETENCIA.

1. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas es competente, en los términos de los artículos 1º, 4º, 6º, 8º fracción VII, inciso A) y 31 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, en relación con el numeral 15, del Reglamento Interno, en razón de que la queja se promueve en contra de servidores públicos de la Presidencia Municipal de Villanueva, Zacatecas.

2. De conformidad con los artículos 123 y 124, fracción I del Reglamento Interior de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, este Organismo advierte que, los hechos narrados presuntamente constituyen una violación a los derechos humanos de los **CC. Q1** y **A1,** así como la responsabilidad por parte de los servidores públicos señalados.

3. Esta Comisión presumió la violación de los siguientes derechos:

a) Derecho a la legalidad y seguridad jurídica, en relación con el derecho a no ser objeto de detenciones ilegales y arbitrarias.
b) Derecho a la integridad y seguridad personal, en relación con el derecho a la integridad física y psicológica.
c) Derecho a la Igualdad y a la no discriminación.

IV. PROCEDIMIENTO ANTE LA COMISIÓN.

Con la finalidad de documentar las presuntas violaciones a derechos humanos, así como para determinar la existencia o no de responsabilidad por parte de los servidores públicos señalados, este Organismo realizó entrevistas a las personas relacionadas con los hechos; se recabaron comparecencias de personal adscrito a la Dirección de Seguridad Pública del municipio de Villanueva, Zacatecas; se solicitaron informes a las autoridades señaladas como responsables así como informes en vía de colaboración y se consultó expediente clínico y carpeta de investigación relacionada con los hechos.

V. PRUEBAS.

Con base en lo estipulado en los artículos 48 y 49 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, en relación con los numerales 150, 151, 152, 153 y 154 del Reglamento Interior de este Organismo, durante el procedimiento realizado por esta Institución, se recabaron los elementos probatorios documentales, remitidos tanto por los agraviados como por las autoridades señaladas como responsables, necesarios para emitir la resolución correspondiente.

VI. SOBRE LOS DERECHOS VULNERADOS.

a) Derecho a la legalidad y seguridad jurídica, en su modalidad de derecho a no ser detenido ilegal y arbitrariamente.

I. Respecto a la ilegalidad de la detención.

1. La seguridad jurídica, es el derecho que tiene toda persona a vivir dentro de un estado de derecho, es decir, bajo la tutela de un ordenamiento jurídico que imponga los límites de las atribuciones de cada autoridad; su actuación no se debe regir de forma arbitraria, sino que debe quedar restringida a lo que ordenan expresamente los artículos 14 y 16 constitucionales[1]. La observancia de la Ley se convierte en el principio básico para la vida pública; ya que este es la condición que da certeza a las personas de que, los funcionarios, no actuarán discrecionalmente, sino que sus actos se encuentran estrictamente enmarcados en un ordenamiento jurídico que los prevé[2].

2. La interdependencia existente entre el derecho a la legalidad y seguridad jurídica es tal, que sus contenidos dan sentido a los contenidos de ambos. Así, mientras la seguridad jurídica nos permite conocer nuestros derechos y obligaciones de modo claro y preciso, el principio de legalidad requiere que todo acto destinado a producir efectos jurídicos debe tener como base una disposición y un procedimiento legal[3].

3. En este sentido, en el Sistema Universal de Derechos Humanos, el derecho a la seguridad jurídica y a la legalidad, se encuentra reconocido tanto en la Declaración Universal de Derechos Humanos[4], como en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos[5], al señalarse que ninguna persona puede ser objeto de injerencias arbitrarias en su vida, familia, derechos, posesiones, etc.

4. Por su parte, en el Sistema Interamericano, se señala que ambos derechos se consagran en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre[6], así como en la Convención Americana sobre Derechos Humanos[7], al señalarse que todas las personas tienen derecho a la protección de la ley contra actos que tengan injerencias arbitrarias en su honra, reputación, vida privada y familiar, así como en su libertad.

5. En nuestro sistema jurídico nacional, el derecho a la seguridad jurídica y el principio de legalidad se encuentran consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al proteger la libertad y seguridad de las personas, a partir de la exigencia de que todos los actos de autoridad que causen molestias sobre éstas, así como en su familia, propiedades o posesiones, deben estar debidamente fundados y motivados. Es decir, las autoridades sólo podrán hacer aquello para lo que están expresamente facultadas y obligadas en una ley y, todo acto o procedimiento por el cual se interfiera en la esfera jurídica de un gobernado, debe estar previsto en una norma legal.

---

1 Recomendación 25/2016, Sobre el Recurso de Impugnación de R, por Violación a su Derecho a la Seguridad Jurídica y a la Legalidad.

2 Recomendación 25/2016, Sobre el Recurso de Impugnación de R, por Violación a su Derecho a la Seguridad Jurídica y a la Legalidad.

3 STC 27/1981, de 20 de julio de 1981, publicada en BOE no. 193, de 13 de agosto de 1981.

4 Cfr. con el contenido del artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

5 Cfr. con el contenido de los artículos 6, 9 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

6 Cfr. con el contenido de los artículos V y XXV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.

7 Cfr. con el contenido del artículo 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

6. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado, a través de la Tesis Aislada con registro 2005766, que el principio de legalidad constituye una garantía del derecho humano a la seguridad jurídica, consistente en que las autoridades sólo pueden hacer aquello para lo que están expresamente facultadas por la ley. De ahí que, aquellos actos realizados por éstas, sin el amparo de una facultad expresa, se considerarán arbitrarios:

> "Época: Décima Época
> Registro: 2005766
> Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
> Tipo de Tesis: Aislada
> Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
> Libro 3, Febrero de 2014, Tomo III
> Materia(s): Constitucional
> Tesis: IV.2o.A.51 K (10a.)
> Página: 2239
>
> PRINCIPIO DE LEGALIDAD. CARACTERÍSTICAS DE SU DOBLE FUNCIONALIDAD TRATÁNDOSE DEL ACTO ADMINISTRATIVO Y SU RELACIÓN CON EL DIVERSO DE INTERDICCIÓN DE LA ARBITRARIEDAD Y EL CONTROL JURISDICCIONAL.
>
> Del artículo 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierten los requisitos de mandamiento escrito, autoridad competente y fundamentación y motivación, como garantías instrumentales que, a su vez, revelan la adopción en el régimen jurídico nacional del principio de legalidad, como una garantía del derecho humano a la seguridad jurídica, acorde al cual las autoridades sólo pueden hacer aquello para lo que expresamente les facultan las leyes, en el entendido de que éstas, a su vez, constituyen la manifestación de la voluntad general. Bajo esa premisa, el principio mencionado tiene una doble funcionalidad, particularmente tratándose del acto administrativo, pues, por un lado, impone un régimen de facultades expresas en el que todo acto de autoridad que no represente el ejercicio de una facultad expresamente conferida en la ley a quien lo emite, se considerará arbitrario y, por ello, contrario al derecho a la seguridad jurídica, lo que legitima a las personas para cuestionar la validez de un acto desajustado a las leyes, pero, por otro, bajo la adopción del mismo principio como base de todo el ordenamiento, se genera la presunción de que toda actuación de la autoridad deriva del ejercicio de una facultad que la ley le confiere, en tanto no se demuestre lo contrario, presunción de legalidad ampliamente reconocida tanto en la doctrina como en la legislación nacional. Así, el principio de legalidad, apreciado en su mayor amplitud, da cabida al diverso de interdicción de la arbitrariedad, pero también conlleva que éste opere a través de un control jurisdiccional, lo que da como resultado que no basta que el gobernado considere que determinado acto carece de fundamentación y motivación para que lo estime no obligatorio ni vinculante o lo señale como fuente de un derecho incontrovertible a una sentencia que lo anule, sino que, en todo caso, está a su cargo recurrir a los órganos de control a hacer valer la asumida ausencia o insuficiencia de fundamento legal y motivación dentro de dicho procedimiento y, a su vez, corresponderá a la autoridad demostrar que el acto cuestionado encuentra sustento en una facultad prevista por la norma, so pena de que sea declarado contrario al derecho a la seguridad jurídica, lo que revela que los procedimientos de control jurisdiccional, constituyen la última garantía de verificación del respeto al derecho a la seguridad jurídica, cuyas reglas deben ser conducentes y congruentes con ese propósito.
>
> SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.

7. Es en este sentido que, el mismo artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual, como se ha visto previamente, contempla el principio de legalidad, de igual forma, hace alusión a las formas en las cuales, las personas pueden ser privadas de su libertad de manera legal, por lo que, ello conlleva una estricta relación entre el derecho a la legalidad y seguridad jurídica, con el derecho a la libertad personal, el cual es aquel que posee todo individuo de disponer de sí mismo y de obrar según su propia voluntad, limitado únicamente por los derechos de terceros y los diversos dispositivos

jurídicos que permiten tener una convivencia ordenada[8]. “La libertad personal es la libertad física en el que se encuentran las personas, misma que debe ser protegida contra toda interferencia ilegal o arbitraria del estado”[9].

8. El derecho a la libertad personal, encuentra su sustento en el Sistema Internacional, a través de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en donde, señala en su artículo 3, que: “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”. En ese mismo sentido, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en los numerales 9.1, 9.2 y 9.3, dispone que todas las personas tienen derecho a la libertad y a la seguridad personales, quedando prohibidas cualquier forma de detención o prisión arbitrarias.

9. En el sistema interamericano, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conviene en los artículos 7.1, 7.2 y 7.3: “1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales, 2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas y 3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios”.

10. Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señala que, la privación de la libertad es considerada como cualquier forma de detención, encarcelamiento, institucionalización, o custodia de una persona, por razones de asistencia humanitaria, tratamiento, tutela, protección, o por delitos e infracciones a la ley, ordenada por o bajo control de facto de una autoridad judicial o administrativa o cualquier otra autoridad, ya sea en una institución pública o privada[10].

11. Para que la autoridad pueda restringir o limitar el ejercicio de este derecho, debe cumplirse con los requisitos formales y materiales del mismo, con el fin de evitar el abuso del poder estatal, tal y como es establecido por el principio a la legalidad. Por esa razón, la jurisprudencia de la Corte Interamericana, ha asumido de manera reiterada que: “cualquier restricción al derecho a la libertad personal debe darse únicamente por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas o por las leyes dictadas conforme a ellas (aspecto material), y además, con estricta sujeción a los procedimientos objetivamente definidos en la misma (aspecto formal)[11]”.

12. El incumplimiento de estos requisitos pueden llevar a la materialización de una detención que puede calificarse como ilegal y/o arbitraria. Es claro que la inobservancia de los aspectos formal y material de la detención, implican que la misma sea ilegal. Asimismo, las autoridades que ejecuten la detención deben respetar y garantizar los derechos de la persona detenida, previamente reconocidos en el artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[12].

13. Sobre la arbitrariedad de las detenciones, la Corte Interamericana ha señalado también que, tal y como lo establece el artículo 7.3 de la Convención Americana, “nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento por causas y métodos que aún calificados de legales pueden reputarse como incompatibles con el respeto a los derechos fundamentales del individuo por ser, entre otras cosas, irrazonables, imprevisibles, o faltos de proporcionalidad”[13]. En ese sentido, las agresiones físicas injustificadas y desproporcionadas, así como las agresiones o intimidaciones psicológicas que lleven a cabo las autoridades en el momento de la detención, califican a ésta como arbitraria.

---

[8] CNDH. Recomendación 13/2017 del 30 de marzo de 2017, Párr. 95.

[9] Amparo Directo en Revisión 3506/2014, resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, párrafos 129 y 130. 24/62

[10] Recomendación No. 11 /2016 Sobre el Caso de la Detención Arbitraria, Desaparición Forzada y Ejecución Arbitraria en agravio de V1, en Anáhuac, Nuevo León, emitida por la CNDH, Ciudad de México, a 21 de marzo de 2016.

[11] Corte Interamericana de Derechos Humanos, Cuadernillo de Jurisprudencia No. 8

[12] Ídem

[13] Artículo 7.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

14. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Chaparro Álvarez estableció que, los derechos a la libertad y seguridad personal, se encuentran regulados en el artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El derecho a la libertad personal "protege exclusivamente el derecho a la libertad física y cubre los comportamientos corporales que presuponen la presencia física del titular del derecho y que se expresan normalmente en el movimiento físico".

15. La Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, establece que nadie puede ser privado de su libertad, sino en los casos y según las formas establecidas por leyes preexistentes.[14] En ese sentido, el Estado Parte, tiene la obligación de tomar medidas de carácter legislativo, administrativo y, ejecutivo, para llevar a cabo detenciones de acuerdo a la ley, por medio de las instituciones encargadas de la Procuración de Justicia, por conducto de las Agencias del Ministerio Públicos, de la Procuraduría General de Justicia y, por conducto de los Jueces del Poder Judicial local.

16. El artículo 9.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, menciona que todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal, y que nadie podrá ser sometido a detención o privación arbitrarias. Asimismo, señala que nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por la ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta. Además, señala el deber del Estado, por conducto de las instituciones jurídicas competentes, para informar a la persona a ser informada, al momento de su detención, de las razones de la misma, y notificarle sin demora, de la acusación formulada en su contra. [15]

17. En el ámbito normativo nacional, el derecho a la libertad personal se encuentra reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 14, párrafo segundo, el cual dispone que: "Nadie podrá ser privado de la libertad (…) sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho"[16]. En el mismo sentido el artículo 16, párrafo primero, constitucional establece que: "Nadie puede ser molestado en su persona (…) sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento[17]".

18. Entonces pues, el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, faculta la detención de cualquier persona, empero, únicamente cuando se justifiquen los siguientes tres formalismos: mediante **orden de aprehensión** girada por el Juez competente, por **orden de detención en caso urgente** girada por el Ministerio Público, o bien, en caso de **delito flagrante.**

19. Es en este sentido que, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que, el derecho a la libertad ≪comprende la posibilidad y el ejercicio positivo de todas las acciones dirigidas a desarrollar las aptitudes y elecciones individuales que no pugnen con los derechos de los demás, ni entrañen abuso de los propios≫ y que, por tal motivo, la libertad personal es un derecho humano protegido tanto por la Constitución Federal (artículos 1, 11, 14 y 16) como en el ámbito internacional (artículos 2, 4 y 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; art. 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; arts. I y XXV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y art. 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos)[18], por lo que el derecho a la libertad personal es reconocido como de primer rango y solo puede ser limitado

---

[14] Artículo XXV de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre.

[15] Artículo 9.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

[16] Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 14

[17] Ídem, Artículo 16

[18] Tesis aislada 1ª. CXCIX/2014 (10°), de rubro "libertad personal. LA AFECTACIÓN A ESE DERECHO HUMANO ÚNICAMENTE PUEDE EFECTUARSE BAJO LAS DELIMITANTES EXCEPCIONALES DEL MARCO CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL" (TMX 313953).

bajo determinados supuestos de excepcionalidad, en armonía con la Constitución Federal y los instrumentos internacionales en la materia[19].

20. Aunado a lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se ha pronunciado a través de las siguientes tesis jurisprudenciales:

> "DETENCIÓN QUE NO REÚNE LOS REQUISITOS DEL ARTICULO 16 CONSTITUCIONAL EN VIGOR. SOLO PUEDE EXAMINARSE SI SE RECLAMA EN EL JUICIO DE AMPARO COMO ACTO AUTÓNOMO E INDEPENDIENTE DEL AUTO DE FORMAL PRISIÓN.
> Si bien es cierto que el ARTÍCULO 16 constitucional en su párrafo primero señala que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, salvo las excepciones que se precisan en los párrafos cuarto y quinto del citado precepto constitucional, esto es, cuando se trata del delito flagrante, en que cualquier persona puede detener al indiciado, o cuando se trata de delito grave así calificado por la ley y ante el riesgo fundado de que el indiciado puede sustraerse a la acción de la justicia, también es cierto que no es posible examinar y decidir en el juicio de garantías, sobre la legalidad o no de la detención cuando se impugna el auto de formal prisión, esto es, cuando sólo se señala como acto reclamado el auto de término constitucional, pero no se reclama como acto destacado el acuerdo mediante el cual el juez natural radica la causa y debe examinar la legalidad de la detención, pues se abordarían aspectos que no formaron parte de la litis en el amparo, los que no son materia de suplencia ya que ésta sólo comprende conceptos de violación o agravios.
>
> PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.
> Amparo en revisión 36/94. José Luis de Jesús Roque y otros. 14 de abril de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Dueñas Sarabia. Secretario: Ezequiel Tlecuitl Rojas.
> Nota: Este criterio ha integrado la jurisprudencia VI.1o. J/1, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo I, Junio de 1995, pág. 301."[20]

> "FLAGRANCIA. LA DETENCIÓN DE UNA PERSONA SIN EL CUMPLIMIENTO IRRESTRICTO DEL MARCO CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL QUE REGULA AQUELLA FIGURA, DEBE CONSIDERARSE ARBITRARIA.
> El artículo 16, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé la siguiente descripción: "Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más cercana y ésta con la misma prontitud, a la del ministerio público. Existirá un registro inmediato de la detención.". Por su parte, los artículos 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos prevén como requisitos para que la detención de una persona sea válida que: 1. Sus causas y condiciones estén fijadas de antemano en la Constitución y en la ley; 2. Prohibición de la detención arbitraria; 3. La persona detenida debe ser informada, en el momento de su detención, de las razones de la misma, y notificada, sin demora, de los cargos formulados contra ella; 4. La persona detenida será llevada sin demora ante la autoridad competente que verifique la legalidad de la detención; 5. Se ordene su libertad si la detención fue ilegal o arbitraria.
>
> Amparo en revisión 703/2012. 6 de noviembre de 2013. Cinco votos por la concesión del amparo de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Mayoría de tres votos por el amparo liso y llano de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Disidentes: José Ramón Cossío Díaz y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo.

---

[19] Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos comentada, José Ramón Cossío Díaz (Coordinador), Tomo 1, Editor Tirant lo Blanch.
[20] Localización: Octava Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo: XIII-Junio. Página 557.

> Encargado del engrose: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretario: José Alberto Mosqueda Velázquez”.[21]

21. Es así que, como se mencionó con anterioridad, el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece las condiciones que deben cumplir los actos de molestia a cargo de la autoridad. Se resumen en tres: expresarse por escrito, provenir de una autoridad competente y que en el documento escrito en el que se exprese se funde y motive la causa legal del procedimiento[22].

22. La primera exigencia se explica por la certeza de la existencia del acto de molestia y constituye un requisito mínimo para que la persona a quien se dirige conozca con precisión la autoridad que lo expide, su contenido y sus consecuencias[23]. La segunda supone que la emisora del acto este facultada constitucional o legalmente y tenga la facultad de emitirlo dentro de sus atribuciones[24].

23. En ese contexto, la autoridad tiene el deber de fundar con precisión su competencia a fin de poner en conocimiento del particular la norma legal que la faculta a emitir el acto de molestia que afecta su esfera jurídica, pues su eficacia o validez dependerá de que se haya realizado por el órgano de la administración de que se trate dentro del respectivo ámbito de sus atribuciones[25].

24. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que la fundamentación implica expresar con precisión el precepto legal aplicable al caso, y la motivación comprende señalar con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto. Esto último satisface el aspecto formal de dicha garantía, y el material se cumple si existe adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables; es decir, es necesario que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas[26].

25. Respecto de la flagrancia, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 1596/2014, señaló que lo flagrante es aquello que brilla a todas luces, que es evidente e inconfundible, por lo que la concurrencia de una conducta delictiva flagrante es una condición que se configura antes de la detención. Ello implica que la autoridad no tiene facultades para detener a una persona ante la sola sospecha de que pudiera estar cometiendo un delito (o de que estuviera por cometerlo), o porque presuma que esté involucrado en la comisión de un delito objeto de investigación si no cuenta con una orden de detención del órgano ministerial[27].

26. Para que la detención en flagrancia sea válida tiene que darse alguno de los siguientes supuestos: a) la autoridad puede aprehender al aparente autor del delito si observa directamente que la acción se está cometiendo en ese preciso instante, esto es, en el iter criminis; b) la autoridad puede iniciar la persecución del aparente autor del delito para aprehenderlo si, mediante elementos objetivos, es posible identificarlo y corroborar que, apenas en el momento inmediato anterior, se encontraba cometiendo el delito denunciado[28].

27. Finalmente, en relación a la flagrancia, es necesario tomar en consideración las pautas expresadas por la Corte Interamericana en la sentencia del *Caso Norín Catrimán y otros*

---

[21] Época: Décima Época, Registro: 2006476, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo I, Materia(s): Constitucional, Tesis: 1a. CC/2014 (10a.), Página: 545.

[22] Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos comentada, José Ramón Cossío Díaz (Coordinador), Tomo 1, Editor Tirant lo Blanch.

[23] Tesis Aislada I. 3. C.52 (9°), de rubro “ACTOS DE MOLESTIA. REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBEN REVESTIR PARA QUE SEAN CONSTITUCIONALES” (TMX 211938)

[24] Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos comentada, José Ramón Cossío Díaz (Coordinador), Tomo 1, Editor Tirant lo Blanch.

[25] Ídem.

[26] Tesis Jurisprudencial registro: 1238212 (7°), de rubro “FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN” (TMX 128555).

[27] Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos comentada, José Ramón Cossío Díaz (Coordinador), Tomo 1, Editor Tirant lo Blanch.

[28] Ídem.

(Dirigentes, miembros y activista del Pueblo Indígena Mapuche) *vs. Chile*, que señaló que las características que debe tener una medida de detención o prisión preventiva para ajustarse a las disposiciones de la Convención Americana, deben fundarse en elementos probatorios suficientes que permitan suponer razonablemente que la persona sometida a proceso ha participado en el ilícito que se investiga.

28. Respecto del tercer supuesto de detención que maneja el artículo 16 constitucional, debe decirse que mediante ejecutoria del 3 de junio de 2015, emitida en el amparo directo en revisión 3506/2014, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, destacó las siguientes características ontológicas atribuidas por la Constitución Federal a las detenciones por caso urgente: a) es una restricción al derecho a la libertad personal; b) es extraordinaria, pues deriva de condiciones no ordinarias, como el riesgo fundado de que la persona acusada de cometer un delito grave se sustraiga de la acción de la justicia y que por razón de la hora, lugar o circunstancia, el Ministerio Publico no pueda ocurrir ante la autoridad judicial a solicitar una orden de aprehensión; c) es excepcional, pues se aparta de la regla general sobre el control judicial previo dentro del régimen de detenciones y d) debe estar, siempre, precedida de una orden por parte del Ministerio Publico, una vez que se han acreditado los tres requisitos que la autorizan: d.i) que se trate de un delito grave, d.ii) que exista riesgo fundado de que el inculpado se fugue, y d.iii) que por razones extraordinarias no sea posible el control judicial previo.

29. En el caso específico, **Q1** manifestó su inconformidad, en relación a la detención de la cual fue objeto, junto con su hermano **A1**, por parte de elementos de la Dirección de Seguridad Pública de Villanueva, Zacatecas, el día 26 de octubre de 2019, al momento de querer ingresar a las instalaciones de la feria de dicho municipio.

30. En este sentido, **Q1**, refirió haber acudido a la feria municipal de Villanueva, Zacatecas, en compañía de **MARISOL LUNA, LEONARDO VÁZQUEZ** y su hermano **A1**, a quienes, a diferencia de él, sí se les permitió el acceso, en virtud a que, los elementos de la Dirección de Seguridad Pública de Villanueva, Zacatecas, lo detuvieron. Situación a la que él se opuso, señalando a los **OFICIALES** que no tenían que negarle la entrada si no traía nada ilícito. No obstante, tanto él como su hermano **A1**, fueron detenidos por parte de dichos elementos, quienes lo llevaron a la Dirección de Seguridad Pública de Villanueva, Zacatecas.

31. Asimismo, se recabó la comparecencia de **A1**, quien manifestó ante personal de esta Comisión que, el sábado 26 de octubre de 2019, aproximadamente a las 23:00 horas, su hermano **Q1** trató de ingresar a las instalaciones de la feria; sin embargo, 2 elementos de la Dirección de Seguridad Pública de Villanueva, Zacatecas, le negaron la entrada. Motivo por el cual, se regresó y les comentó a los elementos policiacos que no lo podían detener si no le encontraron nada; que enseguida, tomó a su hermano y comenzaron a caminar hacia el interior de las instalaciones del recinto ferial. No obstante, en ese momento, fue detenido por la espalda por 2 elementos de Seguridad Pública, uno por cada brazo, señalándoles que, si iba a ser detenido, no pondría resistencia. Sin embargo, manifestó **A1** que, llegó un tercer elemento, el cual, le dio golpes en su cuerpo. Finalmente, refirió que les colocaron las esposas y los llevaron a una patrulla para ser trasladados a la Dirección de Seguridad Pública de Villanueva, Zacatecas.

32. De igual forma, fue solicitado un informe de autoridad al **DOCTOR MIGUEL ÁNGEL TORRES ROSALES,** otrora Presidente Municipal de Villanueva, Zacatecas, quien dio contestación a éste, en fecha 20 de noviembre de 2019, remitiendo a su vez, los partes informativos rendidos por el **COMANDANTE IVÁN SÁNCHEZ NÚÑEZ**, así como por los **OFICIALES HÉCTOR MANUEL MUÑOZ CALVILLO, JULIO CÉSAR ESQUIVEL PADILLA** y **JUAN ANTONIO DÍAZ**, todos adscritos a la Dirección de Seguridad Pública de Villanueva, Zacatecas.

33. Del parte informativo rendido por el **COMANDANTE IVÁN SÁNCHEZ NÚÑEZ**, de la Dirección de Seguridad Pública de Villanueva, Zacatecas, se desprende que, la detención de los agraviados, obedeció a que éstos agredieron verbalmente a los oficiales, quienes, al detectar que **Q1**, pretendía ingresar con una botella, le negaron el acceso, siendo que éste, comenzó a insultarlos verbalmente. Mientras que, **A1**, al observar que su hermano estaba

siendo detenido, comenzó también a insultar a los elementos de dicha corporación policiaca, razón por la cual, se procedió a su detención. Motivo por el que, ambas personas, fueron llevadas a la patrulla 001, en donde fueron trasladados a la Dirección de Seguridad Pública de Villanueva, Zacatecas.

34. En su parte informativo, el **OFICIAL JULIO CÉSAR ESQUIVEL PADILLA,** adscrito a la Dirección de Seguridad Pública de Villanueva, Zacatecas, señaló que siendo las 23:45 horas, del día 26 de octubre de 2019, se percató que otros elementos policiacos estaban forcejeando con una persona del sexo masculino, por lo que decidió acercarse a ese lugar, y observó que otro joven se aproximó, y con empujones, trató de liberar a la primer persona, por lo que le pidió que se retirara; sin embargo, éste lo agredió con palabras altisonantes, por lo cual, procedió a su detención.

35. Asimismo, del parte informativo realizado por el **C. JUAN ANTONIO DÍAZ**, elemento de la Dirección de Seguridad Pública de Villanueva, Zacatecas, en referencia a la detención de **Q1 y A1**, ambos de apellidos […], señaló que observó que el **OFICIAL JULIO CÉSAR ESQUIVEL PADILLA**, no podía colocarle las esposas a un joven, por lo que se acercó a apoyarlo y a conducir al detenido a una patrulla de dicha corporación policiaca, a fin de trasladarlos a separos preventivos.

36. De igual forma, del informe remitido a esta Comisión por parte de la **LICENCIADA MARA PATRICIA SANDOVAL GÓMEZ,** Jueza Calificadora, adscrita a la Dirección de Seguridad Pública de Villanueva, Zacatecas, se desprende que el motivo de la detención de **Q1 y A1**, ambos de apellidos […], se encuentra fundamentado en el artículo 204, incisos C) y H), del Bando de Policía y Buen Gobierno, de Villanueva, Zacatecas, los cuales, a la letra dicen:

> "Artículo 204. Son faltas de policía y buen Gobierno:
> […] C) Faltar al respeto a toda autoridad civil.
> […] H) Escandalizar en la vía pública […]" (sic).

37. Ahora bien, de la comparecencia rendida ante personal de esta Comisión, por el **C. PEDRO MANUEL ECHEVERRÍA HERNÁNDEZ**, elemento de la Dirección de Seguridad Pública de Villanueva, Zacatecas, se advierte que éste señaló que se encontraba en el acceso principal de las instalaciones de la feria, cuando al revisar a **Q1,** le encontró una botella con alcohol, informándole que no podía ingresar con ella, lo que provocó que éste se molestara y comenzara a agredirlo de manera verbal, razón por la cual, procedió a su detención. Señaló además, que el detenido fue entregado al **COMANDANTE IVÁN SÁNCHEZ NÚÑEZ**, quien lo trasladó a bordo de la Unidad 001, a la Dirección de Seguridad Pública de Villanueva, Zacatecas.

38. Por su parte, el **OFICIAL JUAN ANTONIO RUÍZ**, elemento de la Dirección de Seguridad Pública de Villanueva, Zacatecas, manifestó ante personal de este Organismo Público, que él y el **COMANDANTE IVÁN SÁNCHEZ NÚÑEZ**, arribaron a la puerta de acceso a la feria de Villanueva, en donde se encontraba **A1**, dialogando con los **OFICIALES PEDRO MANUEL ECHEVERRÍA HERNÁNDEZ** y **GONZALO CASTRO CUEVAS**. Asimismo, refirió que el **OFICIAL JULIO CÉSAR ESQUIVEL PADILLA**, le solicitó apoyo para colocarle las esposas y trasladarlo a la patrulla. Señaló además que, mientras caminaban con el detenido hacia la unidad, éste los fue insultando.

39. En adición, los **CC. OVAD CÉSAR ECHEVERRÍA HERNÁNDEZ, GONZALO CASTRO CUEVAS** y **JULIO CÉSAR ESQUIVEL PADILLA**, elementos de la Dirección de Seguridad Pública de Villanueva, Zacatecas, son coincidentes en señalar que el motivo de la detención de **Q1** y **A1**, ambos de apellidos […], obedeció a que éstos los insultaron.

40. Como se puede observar, hay coincidencia en las comparecencias de los **OFICIALES PEDRO MANUEL ECHEVERRÍA HERNÁNDEZ, JUAN ANTONIO RUÍZ**, **OVAD CÉSAR ECHEVERRÍA HERNÁNDEZ, GONZALO CASTRO CUEVAS** y **JULIO CÉSAR ESQUIVEL PADILLA**, elementos de la Dirección de Seguridad Pública de Villanueva, Zacatecas, al señalar que el motivo de la detención de los **CC. Q1** y **A1**, ambos de apellidos […], fue debido a las agresiones verbales proferidas por estos, en contra de los elementos policiacos, lo cual, estableció la **LICENCIADA MARA PATRICIA SANDOVAL GÓMEZ,** Jueza

Calificadora, en su informe de autoridad, así como en las hojas de internación de ambos detenidos.

41. A pesar de lo anterior, el personal de la Dirección de Seguridad Pública de Villanueva, Zacatecas, no aportó los elementos suficientes para justificar la detención de **Q1** y **A1,** ambos de apellidos […]**,** limitándose a decir que **Q1**, intentó ingresar con artículos no permitidos a las instalaciones de la feria y, al no permitírselo, tanto él, como **A1**, comenzaron a agredirlos verbalmente.

42. Además de lo anterior, no hay un señalamiento por parte de la autoridad, de que haya existido una apertura al diálogo, ya que, si fuera cierto el hecho que se le atribuye a **Q1,** de querer ingresar con artículos no permitidos, lo primero que se tuvo que realizar, fue la persuasión a través del diálogo, y no llevar a cabo la detención de manera directa. Al respecto, el Comité de Derechos Humanos, ha señalado que "*para que una detención esté en conformidad con el párrafo 1 del artículo 9, [del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos] necesita no solo ser lícita, sino también razonable y necesaria en todas las circunstancias*".[29] Así pues, de las constancias que integran el presente expediente, la autoridad no acredita que previo a la detención, se trató de dialogar con **Q1** y **A1,** ambos de apellidos […], para disuadirlo de su presunto intento por ingresar con objetos ilícitos a las instalaciones de la feria de Villanueva, Zacatecas.

43. Hay que recordar que, para acreditar la legalidad en una privación de la libertad, debemos encontrarnos ante tres supuestos, como lo son, la flagrancia, la orden de aprehensión y el caso urgente, los cuales ya han sido desglosados previamente en la presente recomendación, por lo que, se dan aquí por reproducidos. En el asunto que nos atañe, los elementos de la Dirección de Seguridad Pública municipal de Villanueva, Zacatecas, aludieron la detención de **Q1**, a la supuesta pretensión de éste, por ingresar una botella con alcohol a las instalaciones de la feria, lo cual, detonó las supuestas agresiones verbales que dicen los elementos de la referida corporación policiaca, profirieron los detenidos.

44. Así pues, durante el transcurso de la presente investigación, no fue acreditado por parte de los elementos de la Dirección de Seguridad Pública municipal de Villanueva, Zacatecas, la tentativa de **Q1**, por ingresar una botella con alcohol a las instalaciones de la feria. Lo cual, *per se*, no constituye una falta administrativa, puesto que bastaría con la simple negativa de ingreso del presunto objeto no permitido. No obstante lo anterior, no obra constancia en el presente expediente, de que los elementos de la corporación policiaca de referencia, hayan realizado, de manera verbal al **C. Q1**, la negativa de ingreso del objeto no permitido, sino que, el no dejar que entrara a las instalaciones del recinto ferial a **Q1**, por supuestamente traer consigo una botella con alcohol, resulta a todas luces ilegal, puesto que como ya se mencionó, esto no constituye una falta administrativa que debiera ser objeto de una detención. Además de lo anterior, en ningún momento durante la tramitación del presente expediente, se demostró por parte de los elementos de la Dirección de Seguridad Pública de Villanueva, Zacatecas, la existencia de la supuesta botella.

45. Entonces, lo anterior, constituye un acto de molestia cometido en perjuicio de **Q1,** puesto que, no existía fundamento legal para proceder a su detención, por presuntamente intentar ingresar una botella con alcohol, lo cual, posteriormente, generó un desacuerdo entre los elementos de la Dirección de Seguridad Pública municipal de Villanueva, Zacatecas, y **Q1** y **A1**, ambos de apellidos […]. Por lo que, esta Comisión, determina que la detención de éstos fue ilegal, al no existir sustento jurídico para llevarla a cabo. Sobre todo, tomando en consideración que, las autoridades responsables, no acreditaron la existencia de la supuesta botella.

II. De la arbitrariedad de la detención.

46. Corresponde ahora analizar la aparente arbitrariedad de la detención, señalada por los **CC. A1** y **Q1**, ambos de apellidos […], la cual, se desprendió de las agresiones que refieren

---

[29] Comité de Derechos Humanos, Aage Spakmo v. Norway, Comunicación No. 631/1995, U.N. Doc. CCPR/C/67/D/631/1995 (HRC, 1999), 11 de noviembre de 1999, párr. 6.3.

haber sufrido, por parte de los elementos de la Dirección de Seguridad Pública de Villanueva, Zacatecas, al momento de su detención y posterior traslado a los separos preventivos de dicha municipalidad.

47. Al respecto, resulta aplicable el contenido de la tesis XXI.1o.P.A.4 P (10a.), en materia constitucional y penal, publicada en la gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, en febrero de 2014, tomo III, página 2355, mediante la cual, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señala que en los casos en los que se lleve a cabo la detención de una persona, y ésta presente lesiones, la carga de la prueba no será para el detenido, sino para la autoridad, como es el caso que se resuelve.

48. En este sentido, la tesis señalada, debe ser aplicada de manera análoga al caso que nos ocupa en la presente recomendación, en virtud a que, como se analizará en el siguiente capítulo, **Q1** y **A1,** ambos de apellidos […], sufrieron lesiones producidas por los elementos de la Dirección de Seguridad Pública de Villanueva, Zacatecas, por lo que, de acuerdo a la tesis que se plasmó, la carga probatoria recae en la autoridad, y no en la parte quejosa, por lo cual, quienes están obligados a probar el motivo de la detención y, posteriormente, las lesiones, son precisamente los elementos de Seguridad Pública municipal de Villanueva, Zacatecas.

49. Así pues, toda vez que se acreditó la vulneración al derecho a la integridad y seguridad personal, tanto de **Q1**, como de **A1**, ambos de apellidos […], se debe de establecer el criterio señalado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de su siguiente tesis:

> Época: Décima Época
> Registro: 2010092
> Instancia: Primera Sala
> Tipo de Tesis: Aislada
> Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
> Libro 23, Octubre de 2015, Tomo II
> Materia(s): Constitucional, Penal
> Tesis: 1a. CCLXXXVI/2015 (10a.)
> Página: 1652
>
> DETENCIONES MEDIANTE EL USO DE LA FUERZA PÚBLICA. DEBERES DE LAS AUTORIDADES PARA QUE AQUÉLLAS NO SE CONSIDEREN VIOLATORIAS DE DERECHOS FUNDAMENTALES.
>
> Tratándose de detenciones en que las autoridades emplean la fuerza pública, los funcionarios encargados de aplicarla deben respetar determinados derechos y garantías para considerar que actúan dentro de un marco de legalidad, de modo que aquélla no implique una violación del derecho a la integridad personal del detenido. Por lo tanto, las limitaciones a este derecho deben ser fundamentadas de manera adecuada y absolutamente excepcionales, en las que en todo momento deben respetarse los siguientes deberes: **a) el empleo de la fuerza estrictamente necesaria para el fin buscado debe realizarse con pleno respeto a los derechos humanos del detenido; b) los funcionarios facultados para llevar a cabo la detención deben estar debidamente identificados; c) deben exponerse las razones de la detención, lo cual incluye no sólo el fundamento legal general del aseguramiento sino también la información de los suficientes elementos de hecho que sirvan de base a la denuncia, como el acto ilícito comentado y la identidad de la presunta víctima; en ese sentido, por razones se entiende la causa OFICIAL de la detención y no las motivaciones subjetivas del agente que la realiza; d) debe establecerse claramente bajo la responsabilidad de cuáles agentes es privado de la libertad el detenido, lo cual impone una clara cadena de custodia; e) debe verificarse la integridad personal o las lesiones de la persona detenida; y f) debe constar en un documento la información completa e inmediata de la puesta a disposición del sujeto detenido ante la autoridad que debe calificar su detención**.
>
> Amparo directo en revisión 3153/2014. 10 de junio de 2015. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho para formular voto concurrente, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga

> Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Saúl Armando Patiño Lara.

50. Entonces, de la tesis anterior se desprende que, el criterio señalado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, indica que, para que una detención llevada a cabo, a través del empleo de la fuerza, pueda considerarse dentro de la legalidad, no debe vulnerarse el derecho a la integridad personal del detenido, por lo que se debe procurar **"el empleo de la fuerza estrictamente necesaria para el fin buscado, debiendo realizarse con pleno respeto a los derechos humanos del detenido".**

51. Así pues, en la presente recomendación, se tiene acreditado que **Q1** y **A1**, ambos de apellidos […], fueron víctimas de violaciones al derecho a la integridad y seguridad personal, por parte de los elementos de la Dirección de Seguridad Pública de Villanueva, Zacatecas, con lo cual, de acuerdo al criterio previamente establecido, se vulnera el derecho a la legalidad y seguridad jurídica, en relación con el derecho a no ser objeto de detenciones arbitrarias, por lo que se determina que ésta, además de ilegal, fue arbitraria, debido a que fueron provocadas lesiones en los cuerpos de los detenidos, mismas que se encuentran debidamente acreditadas.

52. Así pues, se debe decir que, la libertad personal no es un derecho absoluto, pues su ejercicio puede ser restringido o limitado con base a criterios de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad. Sin embargo, las prohibiciones de realizar detenciones arbitrarias sí son de carácter absoluto, y constituyen un derecho inderogable no susceptible de suspensión bajo ninguna circunstancia (Caso Rodríguez Vera y otros Vs Colombia). El concepto arbitrariedad no es sinónimo de "contrario a la ley", sino que se refiere a una interpretación más amplia que incluye consideraciones relacionadas con la inadecuación, la injusticia, la imprevisibilidad y las debidas garantías procesales, además de consideraciones relacionadas con la razonabilidad, la necesidad y la proporcionalidad (Comité de Derechos Humanos, Observación General No. 35).

53. Ello, en virtud a que, como se ha mencionado, la detención de la que fueron objeto **Q1** y **A1**, no fue justificada por parte de los elementos aprehensores, considerándose ésta como una detención ilegal, además de que, la falta de la aplicación del procedimiento legal, le otorga el carácter de arbitraria. Situación que, como lo marca el párrafo que precede, es una prohibición de carácter absoluto, ya que, de ninguna forma, una detención arbitraria, puede ser justificada.

54. Ahora bien, hay que señalar que: "*Cuando una detención sobrepasa estándares de proporcionalidad, no sólo el derecho a la libertad personal es vulnerado, sino que, por extensión, derechos como el de la integridad personal y la dignidad de la persona pueden violarse también. Dentro de la jurisprudencia de otros países y dentro de la jurisprudencia de los tribunales penales, el uso desproporcionado de la fuerza en las detenciones es reprobada, […] (Cassese, Antonio, International Criminal Law. Pág. 436). Del mismo modo, las cortes nacionales deben adquirir los mismos estándares, ya que los mismos tribunales internacionales los han establecido como los mínimos necesarios para respetar el debido proceso legal. Así, al realizarse tal acción, la persona víctima de tal violación debe ser regresada a la posición en que se encontraba antes de la acción violatoria".*[30]

55. La situación anterior, tiene estrecha relación con los hechos que nos ocupan, en virtud a que, la detención de **Q1** y **A1**, no fue proporcional al hecho que se les atribuye, ya que ambos, además de ver violentado su derecho a la legalidad y seguridad jurídica, fueron vulnerados en su derecho a la integridad y seguridad personal, por parte de elementos de la Dirección de Seguridad Pública de Villanueva, Zacatecas.

56. De igual forma, es importante señalar lo referido en el artículo 7.3 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, en el cual, se hace el señalamiento sobre el derecho a la libertad personal al considerar que, "Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios". Referente a ello, se debe mencionar que, "la Corte señala que

---

[30] Encontrado en: Manual para la calificación de hechos violatorios de los derechos humanos. CNDH. Coordinador José Luis Soberanes Fernández. Pág. 54. Editorial Porrúa México.

toda decisión privativa de la libertad debe ser suficientemente motivada, pues, de lo contrario, al no ser posible o al dificultarse de sobremanera el examen de la observancia de las condiciones materiales mencionadas, o al quedar en evidencia que se ignoró el principio de proporcionalidad, se estaría violando la prohibición de detención arbitraria del artículo 7.3 de la Convención".[31]

57. En ese sentido, como se desprende del criterio anterior, emanado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el *Caso Barreto Leiva Vs. Venezuela*, cuando una detención realizada por servidores públicos, violenta el principio de proporcionalidad, como es el caso que ahora nos ocupa, se violenta la prohibición de detención arbitraria, es decir, se considera que lo fue, independientemente de las causas que la hayan generado.

58. Se debe hacer mención a que, el principio de proporcionalidad, de acuerdo al artículo 11 de los Lineamientos Generales para la Regulación del Uso de la Fuerza Pública por las Instituciones Policiales de los Órganos Desconcentrados en la Secretaría de Seguridad Pública, establece que "*implica que el uso de la fuerza será adecuado y en proporción a la resistencia o agresión recibida, atendiendo a su intensidad, duración y magnitud. Este principio impone que no se deberá actuar con todo el potencial de una unidad si las personas contra las que se usa la fuerza se encuentran en una situación cuantitativa y cualitativa inferior. En consecuencia, la fuerza empleada debe ser prudente y limitada, sólo para alcanzar el control y neutralización de la agresión. El uso de la fuerza está en directa relación con los medios que emplean las personas que participan en la agresión, su número y grado de hostilidad*".

59. Como se podrá observar, se encuentra debidamente acreditado en el presente expediente que, **Q1** y **A1**, ambos de apellidos […]**,** fueron detenidos mediante el uso excesivo de la fuerza, por parte de los elementos de la Dirección de Seguridad Pública municipal de Villanueva, Zacatecas, provocando lesiones en su integridad corporal, por lo que, se vulneró su derecho a la integridad y seguridad personal y, por ende, la detención se considera arbitraria, vulnerando con ello, su derecho a la legalidad y seguridad jurídica, en relación a no ser objeto de detenciones arbitrarias. Además de que, los elementos aprehensores, durante la sustanciación del presente expediente, no justificaron los elementos que motivaron detención de la cual fueron objeto los agraviados, por lo que, además de arbitraria, es ilegal.

En relación a la actuación de la LICENCIADA MARA PATRICIA SANDOVAL GÓMEZ, Jueza Calificadora, adscrita a la Dirección de Seguridad Pública municipal de Villanueva, Zacatecas.

60. Ahora bien, dentro de las constancias que integran el expediente de queja que se resuelve, se cuenta que, una vez que fueron detenidos los **CC. A1** y **Q1**, por parte de elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Villanueva, Zacatecas, éstos fueron puestos a disposición de la **LICENCIADA MARA PATRICIA SANDOVAL GÓMEZ**, Jueza Calificadora, adscrita a la Dirección de Seguridad Pública municipal de Villanueva, Zacatecas.

61. Al respecto, **A1**, señaló ante personal de esta Comisión que, al llegar a las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Villanueva, Zacatecas, salió una **LICENCIADA** de esas oficinas, la cual, al ver las condiciones en las que se encontraban, les señaló que se retiraran, que no levantaría ningún cargo, y que incluso, les pidió disculpas por los tratos cometidos por los elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Villanueva, Zacatecas.

62. Por su parte, **Q1**, refirió ante personal de este Organismo que, después de llegar a la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Villanueva, Zacatecas, una **LICENCIADA** salió de una oficina, la cual, después de ver las condiciones en las que estaban, les señaló que les quitarían las esposas, una vez que estaban sus padres con ellos.

---

[31] Corte IDH. *Caso Barreto Leiva vs Venezuela. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 17 de noviembre de 2009. Serie C No. 206, párrafos 115 y 116.*

63. Posterior a una plática que tuvieron éstos con la **LICENCIADA MARA PATRICIA SANDOVAL GÓMEZ**, Jueza Calificadora, adscrita a la Dirección de Seguridad Pública municipal de Villanueva, Zacatecas, ésta les comentó que no les cobraría multa, ofreciéndoles una disculpa y señalándoles que ya se podían retirar. Además de ello, **Q1**, señaló que, no les levantaron reporte alguno en la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Villanueva, Zacatecas.

64. En ese sentido, la **LICENCIADA MARA PATRICIA SANDOVAL GÓMEZ**, Jueza Calificadora, adscrita a la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Villanueva, Zacatecas, señaló a través de su informe de autoridad que, el 26 de octubre de 2019, a las 23:50 horas, le fueron presentados ante ese Juzgado Calificador, a **Q1** y **A1**, por la comisión de una falta administrativa. Refirió además que, al momento de estar tomando los generales, arribó a esas instalaciones, la señora **T1**, madre de los detenidos, quien intentaba tranquilizarlos, ya que se encontraban alterados. Mencionó la **LICENCIADA MARA PATRICIA SANDOVAL GÓMEZ**, Jueza Calificadora, que dialogó con la señora **T1**, a quien le comentó que la detención se encontraba fundada en el Bando de Policía y Buen Gobierno, y que posteriormente serían canalizados al Hospital 51 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), para su certificación médica, comentando la señora **T1**, que ella se encargaría de llevarlos al Hospital, ya que si se quedaban ahí, no se tranquilizarían, razón por la cual, la **LICENCIADA MARA PATRICIA SANDOVAL GÓMEZ**, Jueza Calificadora, decidió entregar a **A1** y **Q1**, a su madre.

65. Ahora bien, como se puede observar, hay coincidencia en las manifestaciones de las partes, en señalar que, posteriormente a que **A1** y **Q1**, arribaron a las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Villanueva, Zacatecas, éstos fueron atendidos por la **LICENCIADA MARA PATRICIA SANDOVAL GÓMEZ**, Jueza Calificadora, adscrita a la Dirección de Seguridad Pública municipal de Villanueva, Zacatecas, la cual, procedió a dejarlos en libertad, sin haber realizado el procedimiento legal, que corresponde a todas las detenciones.

66. Al respecto, la Ley de Justicia Comunitaria del Estado de Zacatecas, contempla en su artículo 8, fracción I que, compete a los jueces comunitarios, instaurar el procedimiento administrativo en contra de las personas que son detenidas y presentadas ante el juzgado comunitario. Dentro de dicho procedimiento, se encuentra la certificación médica de los detenidos, la cual, se señala en el artículo 44 de la referida Ley, al referir que, si lo considera necesario, el juez o la jueza comunitaria, dará intervención a un médico que auxilie las labores del juzgado, quien determinará el estado físico y mental de los comparecientes.

67. En este sentido, es importante señalar que, **A1** y **Q1**, tuvieron que haber sido certificados médicamente al momento de llegar a las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública de Villanueva, Zacatecas. En relación a ello, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha hecho hincapié en que, es responsabilidad del Estado, cumplir con las medidas de seguridad que sean necesarias a fin de garantizar plenamente los derechos de las personas privadas de su libertad, entre ellos, se destaca el derecho de éstas a que se salvaguarde su integridad personal. Por lo que, en toda circunstancia, se debe proveer al detenido de una **atención médica oportuna y adecuada**. Esto significa que, cuando una persona sea detenida en cualquier centro de reclusión, ésta **deberá ser revisada por un médico al momento de su ingreso**. Acción que se traduce en **un derecho para la persona privada de su libertad**, y en una **obligación para la autoridad que lo tiene a su disposición**, el cual debe ser acatado a cabalidad[32].

68. Por su parte, la Reglas Mínimas para el tratamiento de Reclusos, en sus numerales 22 y 24 señalan que, todo establecimiento penitenciario dispondrá por lo menos de los servicios de un médico calificado, el cual deberá examinar a cada persona que sea privada de su libertad, tan pronto sea posible, después de su ingreso y, ulteriormente, tan a menudo como sea necesario. Lo anterior, con la finalidad de determinar la existencia de una enfermedad

---

[32] Cuadernillo de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Nº 21: Derecho a la Vida. Párrafo 108.

física o mental, y tomar, en su caso, las medidas que resulten necesarias, realizando y emitiendo el informe correspondiente a la autoridad superior.

69. Asimismo, los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de la Libertad en las Américas, también contempla que, toda persona privada de libertad tendrá derecho a que se le practique un examen médico o psicológico, imparcial y confidencial, practicado por personal de salud idóneo, inmediatamente después de su ingreso al establecimiento de reclusión o de internamiento, con el fin de constatar su estado de salud físico o mental, y la existencia de cualquier herida, daño corporal o mental; asegurar la identificación y tratamiento de cualquier problema significativo de salud; o para verificar quejas sobre posibles malos tratos o torturas o determinar la necesidad de atención y tratamiento.

70. De igual manera, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pronunció un Conjunto de Principios para la Protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión (2018), entre los cuales se destaca que, toda persona arrestada deberá de ser oída sin demora por un juez y tendrá el derecho de defenderse por sí misma o por un abogado, de la misma manera, tendrá derecho a tener contacto o recibir visita de sus familiares de manera inmediata, y que además, a cada persona detenida, se le realizará un examen médico apropiado con la menor dilación posible, atención y tratamiento (en el caso de ser necesario) que serán gratuitos para el detenido y respecto al cual deberá quedar la debida constancia.

71. Como se puede observar, en el presente caso, era necesaria la intervención de un médico que certificara las lesiones con las que se encontraban **A1** y **Q1**, ya que se acreditó que sí tenían daños en su integridad física, puesto que además, así lo asentó la propia **LICENCIADA MARA PATRICIA SANDOVAL GÓMEZ**, Jueza Calificadora, adscrita a la Dirección de Seguridad Pública municipal de Villanueva, Zacatecas, en las hojas de internación de ambos agraviados, al marcar la casilla que indica que sí presentaban lesiones al momento de que fueron puestos a disposición de esa autoridad municipal, lo cual, hacía necesaria la certificación médica de **A1** y **Q1,** en la Dirección de Seguridad Pública Municipal, y no dejarlos en libertad sin haber cumplido con el procedimiento legal establecido.

72. Por ello, la **LICENCIADA MARA PATRICIA SANDOVAL GÓMEZ**, Jueza Calificadora, adscrita a la Dirección de Seguridad Pública municipal de Villanueva, Zacatecas, incumplió con el procedimiento administrativo que se debe realizar a toda persona detenida, máxime, cuando dicha funcionaria, observó a simple vista que, **A1** y **Q1,** contaban con lesiones, que éstos atribuyeron directamente a los elementos captores. Por lo anterior, existe una vulneración al derecho a la legalidad y seguridad jurídica, cometida por parte de la **LICENCIADA MARA PATRICIA SANDOVAL GÓMEZ**, Jueza Calificadora, adscrita a la Dirección de Seguridad Pública municipal de Villanueva, Zacatecas, en contra de **A1** y **Q1.**

b) Derecho a la integridad y seguridad personal, en relación con el derecho a la integridad física y psicológica.

73. El derecho a la integridad y seguridad personal, se puede definir como la prerrogativa que tiene toda persona, a no sufrir actuaciones nocivas en su estructura corporal, sea fisonómica, fisiológica o psicológica, o cualquier otra alteración en el organismo que deje huella temporal o permanente, que cause dolor o sufrimientos graves, con motivo de la injerencia o actividad dolosa o culposa de un tercero. Lo anterior, implica un derecho subjetivo consistente en la satisfacción de la expectativa de no sufrir alteraciones nocivas en la estructura psíquica y física del individuo, cuya contrapartida consiste en la obligación de las autoridades de abstenerse de la realización de conductas que produzcan dichas alteraciones.[33]

[33] Manual para la calificación de hechos violatorios de los derechos humanos, Editorial Porrúa México, Coordinador José Luis Soberanes Fernández, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, página 225.

74. El derecho a la integridad personal consiste en la obligación que tienen las autoridades de respetar las condiciones físicas, psicológicas, sexuales y morales que permiten el desarrollo de las personas, así como en el deber de no someter a nadie a tortura o cualquier otro trato cruel, inhumano o degradante. Es decir, el derecho a la integridad personal implica que nadie puede ser lesionado o agredido física, psicológica o mentalmente.

75. En el marco normativo del Sistema Universal de Protección a los Derechos Humanos, el derecho a la integridad personal se establece en los artículos 3 y 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, los artículos 7 y 10 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Preceptos en los que, de manera similar, se establece que todas las personas tienen derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral.

76. Respecto a la regulación del derecho a la integridad personal en el Sistema Interamericano, éste se encuentra estipulado en el mismo sentido en los artículos 1 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

77. De igual forma, la Corte Interamericana ha señalado *que, la infracción del derecho a la integridad física y psíquica de las personas es una clase de violación que tiene diversas connotaciones de grado y que abarca desde la tortura hasta otro tipo de vejaciones o tratos crueles, inhumanos o degradantes cuyas secuelas físicas y psíquicas varían de intensidad según los factores endógenos y exógenos que deberán ser demostrados en cada situación concreta.*[34]

78. En el marco jurídico nacional, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra este derecho en los artículos 14 y 16, conforme a los cuales nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio o posesiones y que, en caso de que alguna persona sea molestada, dicha acción debe estar sustentada en mandamiento escrito de autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

79. Asimismo, los encargados de hacer cumplir la Ley, en el desempeño de sus funciones, tienen la obligación de respetar y proteger la dignidad humana y de mantener y defender derechos humanos de todas las personas.[35] Igualmente, los servidores públicos están obligados a observar buena conducta en su empleo, cargo o comisión tratando con respeto, diligencia, imparcialidad y rectitud a las personas con las que tenga relación en el ejercicio de sus funciones.[36]

80. Bajo tal perspectiva, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha asumido, de manera reiterada, el criterio de que *"el derecho a la integridad personal es aquél que tiene todo sujeto para no sufrir tratos que afecten su estructura corporal, sea física, fisiológica o psicológica, o cualquier otra alteración en el organismo que deje huella temporal o permanente, que cause dolor o sufrimiento grave con motivo de la injerencia o actividad dolosa o culposa de un tercero."*[37]

81. Cabe hacer mención al Amparo Penal en revisión 4116/30, de la Quinta Época, Primera Sala, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo: XXXII, que señala:

> "Titulo: LESIONES.
>
> Texto: El artículo 511 del Código Penal del Distrito, al prevenir que bajo el nombre de lesión se comprendan no solamente las heridas, sino toda alteración en la salud y cualquier otro daño que deje huella material en el cuerpo humano, si sus efectos son producidos por una causa externa, establece con relación ideológica entre las lesiones y demás alteraciones y daños de la salud y las huellas que dejan, correspondientes a la que en la realidad existe entre las mencionadas heridas y las cicatrices que originan, de tal suerte que, ligadas como se encuentran unas y otras con la aludida relación de causa a efecto, la diligencia de fe judicial referente a este no puede menos que comprobar, lógica y, por tanto,

---

[34] Corte IDH. Caso *Loayza Tamayo vs. Perú*, Sentencia de Fondo. 17 de septiembre de 2007, párr. 57.

[35] Artículo 2 del Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley.

[36] Artículo 6 fracción IV de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Zacatecas.

[37] CNDH Recomendación 69/2016 de fecha 28 de diciembre de 2016, párr. 135 y Recomendación 71/2016 del 30 de diciembre de 2016, párr. 111.

> necesariamente, la existencia pretérita de aquella. nota: el artículo de referencia corresponde al 288 del Código Penal para el Distrito Federal del año de 1931.
>
> Amparo penal en revisión 4116/30. Gutiérrez Gurría Carlos. 26 de agosto de 1931. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Enrique Osorno Aguilar. La publicación no menciona el nombre del ponente."[38]

82. Así pues, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señala que, toda alteración en la salud, así como cualquier otro daño que deje huella material en el cuerpo humano, si fueran producidos por una causa externa, deberán de considerarse como lesiones, siguiendo la relación entre la causa de éstas y los efectos que puedan llegar a dejar en la corporeidad de las personas.

83. En relación al derecho a la integridad y seguridad personal, los **CC. Q1** y **A1,** ambos de apellidos […], manifestaron haber sido agredidos por parte de los elementos de la Dirección de Seguridad Pública de Villanueva, Zacatecas, el día 26 de octubre de 2019, posterior a haber sido detenidos en las instalaciones de la feria de dicho municipio.

84. Así entonces, en virtud a que las agresiones físicas de las cuales fueron objeto los **CC. Q1** y **A1** ambos de apellidos […]**,** fueron en distintos momentos, éstas se analizarán de manera independiente, para que se cuente con un mejor entendimiento de los hechos, por lo que, en un primer momento, serán analizadas las lesiones presentadas por **A1** y, posteriormente, las lesiones que presentó **Q1**.

b.1. Respecto de la vulneración al derecho a la integridad y seguridad personal de A1.
85. Al respecto, **A1**, persona agraviada dentro del presente expediente, mediante su comparecencia ante personal de esta Comisión, manifestó haber sido víctima de vulneraciones a sus derechos humanos, específicamente al derecho a la integridad personal, al haber sido objeto de lesiones durante su detención, llevada a cabo por parte de elementos de la Dirección de Seguridad Pública de Villanueva, Zacatecas.

86. De manera precisa, **A1** señaló que, el día 26 de octubre de 2019, en el acceso principal de la feria municipal de Villanueva, Zacatecas, fue objeto de una detención por parte de elementos de la Dirección de Seguridad Pública. Asimismo, manifestó que, una vez que estuvo asegurado por dos elementos de la referida Dirección, llegó al lugar un tercer elemento, el cual, lo agredió físicamente, propinándole golpes en la cara, además de tomarlo del cuello y con el puño cerrado le golpeó en el ojo y la nariz del lado izquierdo.

87. En este sentido, de los partes informativos levantados por parte del **COMANDANTE IVÁN SÁNCHEZ NÚÑEZ**, así como de los **OFICIALES JULIO CÉSAR ESQUIVEL PADILLA** y **JUAN ANTONIO DÍAZ**, todos adscritos a la Dirección de Seguridad Pública de Villanueva, Zacatecas, no se desprende que hagan mención a las lesiones que manifiesta **A1** en su comparecencia, sino que coinciden en referir que éste los agredió verbalmente.

88. De igual forma, en las comparecencias rendidas ante personal de esta Comisión, por parte de los **CC. PEDRO MANUEL ECHEVERRÍA HERNÁNDEZ, JUAN ANTONIO DÍAZ, OVAD CÉSAR ECHEVERRÍA HERNÁNDEZ, GONZALO CASTRO CUEVAS** y **JULIO CÉSAR ESQUIVEL PADILLA**, elementos de la Dirección de Seguridad Pública de Villanueva, Zacatecas, se limitan a señalar que **A1**, los agredió a ellos de manera verbal, sin que refieran nada acerca de las lesiones de éste.

89. No obstante lo anterior, resulta de suma importancia para la investigación que, la **LICENCIADA MARA PATRICIA SANDOVAL GÓMEZ**, Jueza Calificadora, adscrita a la Dirección de Seguridad Pública municipal de Villanueva, Zacatecas, en la hoja de internación de **A1**, con número de folio 532, de fecha 26 de octubre de 2019, a las 23:50 horas, hizo el señalamiento que el detenido, sí presentaba lesiones. Aunque, se debe señalar que no se establecieron qué tipo de lesiones, en virtud a que fue liberado sin antes haber sido certificado médicamente en la Dirección de Seguridad Pública de Villanueva, Zacatecas. Por lo que, solamente se cuenta con lo señalado respecto de dichas lesiones, por parte de la

[38]Quinta Epoca, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo: XXXII, Página: 2113

LICENCIADA MARA PATRICIA SANDOVAL GÓMEZ, Jueza Calificadora, quien realizó una inspección ocular del agraviado. Por lo que, evidentemente, en lo sucesivo deberá garantizarse que toda persona que sea detenida, independientemente de las condiciones en las que ésta se lleve a cabo la detención, debe ser certificada clínicamente por un médico, con la finalidad de dejar evidencia de la forma en la que fue presentado ante el Juez o la Jueza Comunitario y/o Calificadora.

90. Por lo anterior, personal de esta Comisión, al momento de tener conocimiento del hecho denunciado por los **CC. Q1** y **A1**, ambos de apellidos […], solicitó al **DOCTOR VÍCTOR MANUEL GUERRERO GARCÍA**, Director de los Servicios Periciales, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, les practicara los correspondientes certificados de lesiones a ambos agraviados.

91. En respuesta a lo anterior, en fecha 01 de julio de 2020, se remitió revisión médica de lesiones, practicada el día 30 de octubre de 2019, a las 15:40 horas, a **A1**, realizada por la **DOCTORA NORMA ALICIA GUARDADO MARTÍNEZ**, Perito Médico Legista, adscrita a la Dirección General de Servicios Periciales, de la Fiscalía General de Justicia del Estado. En dicho certificado, se estableció que **A1**, al momento de la revisión física, presentó las siguientes lesiones:

> "[…] 1. Equimosis morada de diez por cuatro (10x04) centímetros localizada en cara posterior de tórax.
> 2. Equimosis morada de diez por tres (10x03) centímetros localizada en cara posterior de tórax.
> 3. Equimosis morada de diez por siete (10x7) centímetros localizada en cara anterior de hombro izquierdo.
> 4. Escoriación de dos por uno (2x1) centímetros localizada en cara anterior de muñeca izquierda.
> 5. Escoriación de uno por uno (1x1) centímetros localizada en cara lateral interna de muñeca derecha.
> 6. Equimosis de cinco por tres (5x3) centímetros localizada en párpado inferior izquierdo […]" (sic).

92. Lo anterior, permite concluir a este Organismo que, al momento de su presentación ante la **LICENCIADA MARA PATRICIA SANDOVAL GÓMEZ**, Jueza Calificadora, adscrita a la Dirección de Seguridad Pública municipal de Villanueva, Zacatecas, **A1,** presentaba las lesiones manifestadas en el punto anterior.

93. Así pues, las lesiones descritas por la **DOCTORA NORMA ALICIA GUARDADO MARTÍNEZ**, Perito Médico Legista, adscrita a la Dirección General de Servicios Periciales, de la Fiscalía General de Justicia del Estado, son coincidentes con la narración de hechos realizada por parte de **A1**, quien señaló que una vez que estuvo detenido, fue objeto de golpes por parte de elementos de la Dirección de Seguridad Pública de Villanueva, Zacatecas, principalmente en su costado izquierdo, como se puede observar en los puntos 3, 4 y 6 del certificado médico que se plasmó.

94. Además de lo anterior, esta Comisión cuenta con evidencia fotográfica que hace constar las lesiones descritas en el certificado médico de **A1**, las cuales tienen coincidencia con la narrativa de hechos que realizó ante personal de este Organismo, en virtud a que, en las fotografías se observa que **A1**, presenta lesiones en ambas muñecas, así como en el pecho y en su hombro izquierdo, lo cual, es descrito por la **DOCTORA NORMA ALICIA GUARDADO MARTÍNEZ**, Perito Médico Legista, adscrita a la Dirección General de Servicios Periciales, de la Fiscalía General de Justicia del Estado, en el certificado médico practicado en la corporeidad de **A1.**

95. Si bien es cierto, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley están autorizados para usar la fuerza, existe una delimitación para el ejercicio de esta facultad, ya que, los agentes deben emplear la fuerza sólo en la medida de lo necesario para alcanzar su objetivo, estos no deberán aplicarla en absoluto si el objetivo puede lograrse sin ella. En este sentido, cuando no pueda prescindirse del uso de la fuerza, éstos recurrirán sólo a la fuerza mínima necesaria para ese fin, procurando causar el menor daño posible, esto es, si es necesario emplear la fuerza para alcanzar un objetivo legítimo, las consecuencias de esa

fuerza no deberán ser superiores al valor del objetivo que se desea lograr porque, en tal caso, el empleo de la fuerza sería desproporcionado. En otras palabras, los funcionarios no pueden perseguir sus objetivos sin tener en cuenta todos los otros criterios.[39]

96. En ese contexto, la Corte Interamericana, ha reconocido que los Estados tienen el derecho de emplear legítimamente la fuerza, para cumplir con su obligación de garantizar la seguridad y mantener el orden público dentro de su territorio, incluso el uso de la fuerza letal; pero también, ha sido enfática en señalar los límites a los que debe estar sujeto el uso de ésta; dicho lo anterior, sin importar la gravedad de ciertas acciones ni la culpabilidad de sus autores. En este sentido, ha señalado que "*el uso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad estatales debe estar definido por la excepcionalidad, y debe ser planeado y limitado proporcionalmente por las autoridades*". Es decir, el uso de la fuerza por parte de los agentes estatales, a partir de la jurisprudencia interamericana, está limitado por la excepcionalidad y la proporcionalidad. Es por ello que, el empleo de ésta, debe ser la última ratio, ya que puede ser usada sólo cuando se han agotado y fracasado todos los demás medios; es decir, si el uso de la fuerza es el primer y único recurso éste será inconvencional.[40]

97. En concordancia a lo anterior, la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, en su artículo 4°, establece que el uso de la fuerza se regirá bajo los siguientes principios:

> I. Absoluta necesidad: para que el uso de la fuerza sea la última alternativa para tutelar la vida e integridad de las personas o evitar que se vulneren bienes jurídicamente protegidos o con el fin de mantener el orden y la paz pública, al haberse agotado otros medios para el desistimiento de la conducta del agresor;
> II. Legalidad: para que la acción de las instituciones de seguridad se realice con estricto apego a la Constitución, a las leyes y a los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte;
> III. Prevención: para que los operativos para el cumplimiento de la ley sean planificados y se lleven a cabo, en la medida de lo posible, minimizando el uso de la fuerza y, cuando esto sea inevitable, reduciendo al mínimo los daños que de ello puedan resultar;
> IV. Proporcionalidad: para que el nivel de fuerza utilizado sea acorde con el nivel de resistencia ofrecido por el agresor y el nivel de riesgo exhibido, de tal forma que los agentes apliquen medios y métodos bajo un criterio de uso diferenciado y progresivo de la fuerza, y
> V. Rendición de cuentas y vigilancia: para que existan controles que permitan la evaluación de las acciones de uso de la fuerza y sea valorada su eficacia en términos del desempeño de las responsabilidades y funciones previstas por esta Ley.

98. El mismo precepto legal, en su artículo 6°, menciona que el impacto del uso de la fuerza en las personas estará graduado de la siguiente manera:

> I. Persuasión: cese de la resistencia a través del uso de indicaciones verbales o de la simple presencia de la autoridad, para lograr la cooperación de las personas con la autoridad;
> II. Restricción de desplazamiento: determinar un perímetro con la finalidad de controlar la agresión;
> III. Sujeción: utilizar la fuerza física con moderación para lograr el control o aseguramiento de los individuos;
> IV. Inmovilización: utilizar la fuerza física con intensidad, pudiendo emplear medios o equipos destinados a restringir la movilidad de las personas para lograr su aseguramiento;
> V. Incapacitación: utilizar la fuerza física con máxima intensidad, permitiendo el empleo de armas menos letales, así como sustancias químicas irritantes que perturben las funciones sensoriales, con la finalidad de neutralizar la resistencia y la violencia, teniendo alta probabilidad de causar lesiones que no pongan en riesgo la vida del agresor;
> VI. Lesión grave: utilizar la fuerza epiletal, permitiendo el uso de armas menos letales o de fuego con la finalidad de neutralizar a los agresores y proteger la

---

39 Reglas y Normas Internacionales aplicables a la Función Policial. Comité Internacional de la Cruz Roja. Empleo de la Fuerza y las Armas de Fuego. Pág. 36-37.

40 Uso de la Fuerza por parte de los Agentes del Estado. Análisis desde el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Universidad Nacional Autónoma de México y Comisión Nacional de los Derechos Humanos. México 2017. Pág. 4-5.

> integridad de la autoridad o de personas ajenas, con alta probabilidad de dañar gravemente al agresor, y
> VII. Muerte: utilizar la fuerza letal como una acción excepcional, permitiendo el uso de armas menos letales o de fuego con la finalidad de repeler y neutralizar la agresión, no teniendo otra opción para proteger la vida de las personas ajenas o la propia, a sabiendas que existe un alto riesgo de causar la muerte del agresor.

99. El mandato ya referido, en su artículo 10°, establece los criterios para clasificar las conductas que ameritan el uso de la fuerza, en virtud a la intensidad de la resistencia opuesta por el objetivo a detener, y los cataloga de la siguiente manera:

> I. Resistencia pasiva: conducta de acción u omisión que realiza una o varias personas, exenta de violencia, para negarse a obedecer órdenes legítimas comunicadas de manera directa por los sujetos obligados, quienes previamente se han identificado como autoridad. Contra la resistencia pasiva podrán oponerse los mecanismos de reacción a los que se refieren las fracciones I y II del artículo anterior;
> II. Resistencia activa: conducta de acción u omisión que realiza una o varias personas, empleando la violencia, el amago o la amenaza, para negarse a obedecer órdenes legítimas comunicadas de manera directa por los sujetos obligados, quienes previamente se han identificado como autoridad. Contra la resistencia activa podrán oponerse los mecanismos de reacción a los que se refieren las fracciones I, II, III y IV del artículo anterior, y
> III. Resistencia de alta peligrosidad: conducta de acción u omisión que realiza una o varias personas, empleando la violencia, el amago o la amenaza con armas o sin ellas para causar a otra u otras o a miembros de las instituciones de seguridad, lesiones graves o la muerte, negándose a obedecer órdenes legítimas comunicadas de manera directa por los sujetos obligados, quienes previamente se han identificado como autoridad. Contra la resistencia de alta peligrosidad podrán oponerse los mecanismos de reacción a los que se refieren las fracciones I, II, III, IV y V del artículo anterior.

100. Con respecto a lo anterior, sirve el siguiente criterio emanado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante la tesis aislada con número de registro 2010093, en la cual se hace alusión a lo siguiente:

> Época: Décima Época
> Registro: 2010093
> Instancia: Primera Sala
> Tipo de Tesis: Aislada
> Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
> Libro 23, Octubre de 2015, Tomo II
> Materia(s): Constitucional, Penal
> Tesis: 1a. CCLXXXVII/2015 (10a.)
> Página: 1653
>
> DETENCIONES MEDIANTE EL USO DE LA FUERZA PÚBLICA. PARÁMETROS ESENCIALES QUE LAS AUTORIDADES DEBEN OBSERVAR PARA ESTIMAR QUE AQUÉLLAS SON ACORDES AL RÉGIMEN CONSTITUCIONAL.
>
> El artículo 19, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, regula el derecho fundamental de toda persona a no recibir mal trato durante las aprehensiones o detenciones; asimismo, el artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos consagra el derecho de toda persona a la libertad y seguridad personales y protege el derecho a no ser privado de la libertad de manera ilegal o arbitraria. Por tanto, en un contexto donde las fuerzas policiales realizan una detención, el uso de la fuerza pública debe ser limitado y ceñirse al cumplimiento estricto de los siguientes parámetros esenciales: 1) Legitimidad, que se refiere tanto a la facultad de quien la realiza como a la finalidad de la medida, es decir, que la misma sea inherente a las actividades de ciertos funcionarios para preservar el orden y la seguridad pública, pero únicamente puede ser utilizada en casos muy específicos y cuando otros medios resulten ineficaces o no garanticen el logro del resultado. 2) Necesidad, que supone el que la fuerza pública debe ser utilizada solamente cuando sea absolutamente necesaria, pero deben agotarse previamente los medios no violentos que existan para lograr el objetivo que se busca, de manera que sólo opere cuando las alternativas menos restrictivas ya fueron agotadas y no dieron resultados, en función de las respuestas que el

> agente o corporación deba ir dando a los estímulos que reciba, por lo que es preciso verificar si la persona que se pretende detener representa una amenaza o un peligro real o inminente para los agentes o terceros. 3) Idoneidad, que implica su uso como el medio adecuado para lograr la detención. 4) Proporcionalidad, que exige la existencia de una correlación entre la usada y el motivo que la detona, pues el nivel de fuerza utilizado debe ser acorde con el nivel de resistencia ofrecido; así, los agentes deben aplicar un criterio de uso diferenciado y progresivo de la fuerza, determinando el grado de cooperación, resistencia o agresión de parte del sujeto al cual se pretende intervenir y con ello emplear tácticas de negociación, control o uso de fuerza según corresponda.
>
> Amparo directo en revisión 3153/2014. 10 de junio de 2015. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho para formular voto concurrente, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Saúl Armando Patiño Lara.

101. Como se puede observar, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, establece cuatro parámetros esenciales que justifiquen el uso de la fuerza de los elementos captores: a) Legitimidad, b) Necesidad, c) Idoneidad y d) Proporcionalidad. Mismos que son coincidentes con los establecidos en el Manual para el Uso de la Fuerza, como en los Lineamientos Generales para la Regulación del Uso de la Fuerza Pública por las Instituciones Policiales de los Órganos Desconcentrados en la Secretaria de Seguridad Pública[41], por las consideraciones que a continuación se señalan:

> a) El principio de necesidad, de acuerdo a lo establecido en el artículo 10 de los Lineamientos Generales para la Regulación del Uso de la Fuerza Pública por las Instituciones Policiales de los Órganos Desconcentrados en la Secretaría de Seguridad Pública, "*significa que sólo cuando sea estrictamente necesario e inevitable los integrantes emplearán la fuerza para impedir la perturbación del orden público y para restablecerlo*". Ahora bien, en el asunto que nos compete, en referencia a **A1**, se tiene acreditado que, éste presentó vulneraciones físicas, provocadas por los elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Villanueva, Zacatecas, sin que éstos, a lo largo de la investigación, hayan justificado la necesidad de violentar físicamente al agraviado, puesto que, **A1**, en todo momento desde su detención, se encontró esposado, por lo cual, no representaba un peligro real e inminente para los elementos policiacos.
>
> b) El principio de proporcionalidad, de acuerdo al artículo 11 de los Lineamientos señalados en el inciso anterior, establece que "*implica que el uso de la fuerza será adecuado y en proporción a la resistencia o agresión recibida, atendiendo a su intensidad, duración y magnitud. Este principio impone que no se deberá actuar con todo el potencial de una unidad si las personas contra las que se usa la fuerza se encuentran en una situación cuantitativa y cualitativa inferior. En consecuencia, la fuerza empleada debe ser prudente y limitada, sólo para alcanzar el control y neutralización de la agresión. El uso de la fuerza está en directa relación con los medios que emplean las personas que participan en la agresión, su número y grado de hostilidad*". Al respecto, debe señalarse que, el número de elementos policiacos intervinientes, es superior al número de personas detenidas, ya que **A1** y **Q1**, solamente eran dos personas, mientras que se tiene acreditada la participación de 7 elementos de la Dirección de Seguridad Pública municipal de Villanueva, Zacatecas, quienes, para ejercer el oficio que desempeñan, tuvieron que haber sido capacitados para reaccionar a las diversas situaciones que por la naturaleza de su empleo pudieran encontrar, es decir, tanto cuantitativa, como cualitativamente, **A1** y **Q1**, se encontraban en inferioridad, respecto de los elementos aprehensores.

---

[41] Lineamientos Generales para la Regulación del Uso de la Fuerza Pública por las Instituciones Policiales de los Órganos Desconcentrados en la Secretaria de Seguridad Pública, encontrado en: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php%3Fcodigo%3D5244759%26fecha%3D23/04/2012

c) El principio de racionalidad en el uso de la fuerza pública, de acuerdo al artículo 12 de los Lineamientos antes referidos, señala que: "*implica que ésta será empleada de acuerdo a elementos objetivos y lógicos con relación a la situación hostil que se presenta, a efecto de valorar el objetivo que se persigue, las circunstancias del caso y las capacidades tanto del sujeto a controlar como la de los propios Integrantes*". Se debe señalar que, en caso de que los oficiales de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Villanueva, Zacatecas, hayan determinado contar con elementos suficientes para llevar a cabo la detención de los quejosos, ésta se tuvo que haber realizado mediante la utilización de las técnicas adecuadas, para lo cual, tuvieron que haber recibido una capacitación profesional para desempeñarse en el cargo que ocupan. Además de ello, hay que hacer el señalamiento que, **A1** y **Q1**, fueron esposados al momento de su detención, por parte de los elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Villanueva, Zacatecas, por lo cual, no representaba una verdadera situación hostil, ya que los agraviados se encontraban completamente controlados por parte de los elementos policiacos, por lo que, el uso de la fuerza, ejercida por éstos, en contra de los quejosos, fue a todas luces irracional y alevosa.

d) El principio de oportunidad en el uso de la fuerza pública, de acuerdo al artículo 13 de los Lineamientos Generales para la Regulación del Uso de la Fuerza Pública por las Instituciones Policiales de los Órganos Desconcentrados en la Secretaría de Seguridad Pública, "*tenderá a la actuación policial inmediata para evitar o neutralizar un daño o peligro inminente o actual, que vulnere o lesione la integridad, derechos o bienes de las personas, las libertades, la seguridad ciudadana o la paz pública*". En este sentido, de acuerdo a la investigación realizada por parte de esta Comisión, **A1** y **Q1**, no representaban un daño o peligro inminente, ni para los elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Villanueva, Zacatecas, ni para terceros, puesto que, en todo momento, los elementos policiacos, los superaban en número, y estos, están capacitados para intervenir en cualquier situación de seguridad, por lo que, existió un uso excesivo de la fuerza.

102. Por lo señalado en los puntos que preceden, se puede asegurar que los elementos de la Dirección de Seguridad Pública de Villanueva, Zacatecas vulneraron el derecho a la integridad y seguridad personal de **A1**. Al respecto, se tiene acreditado que la detención fue realizada únicamente por parte de los **CC. JULIO CÉSAR ESQUIVEL PADILLA** y **JUAN ANTONIO DÍAZ,** elementos de la referida Dirección, sin que se desprenda la intervención de un tercer oficial, como así lo señaló **A1**. Por lo cual, si estos dos elementos fueron los únicos que tuvieron contacto con el agraviado, y utilizando un silogismo jurídico, se arriba a la conclusión de que fueron los **CC. JULIO CÉSAR ESQUIVEL PADILLA** y **JUAN ANTONIO DÍAZ** quienes vulneraron el derecho a la integridad y seguridad personal de **A1**, ya que nadie más intervino en la detención de éste.

b2. Respecto de la vulneración al derecho a la integridad y seguridad personal, en relación con el derecho a la igualdad y no discriminación de Q1.

103. Antes de abordar la violación al derecho a la integridad física de **Q1**, se debe poner en contexto la situación de los Derechos Humanos de las personas lesbianas, gay, bisexuales, travestis, transgénero, transexuales e intersexuales (**LGBTI+**)[42], esto, en virtud a que **Q1**, hizo referencia en su escrito de queja, a que fue discriminado por sus preferencias sexuales, además de que en la narrativa de su comparecencia, hace el señalamiento de que pertenece a la comunidad **LGBTI+.**

[42] Esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, reconoce de igual forma, al utilizar el símbolo +, a las personas asexuales, queer, entre otros, cualquiera que sea su identidad de género; sin embargo, para la presente recomendación, serán utilizadas las iniciales LGBTI+.

104. La orientación sexual y la identidad de género son características que conforman algunos de los aspectos más esenciales de la vida de una persona.[43] De acuerdo a lo señalado por parte de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay: "*a final de cuentas, la homofobia y la transfobia no son diferentes del sexismo, la misoginia, el racismo o la xenofobia, pero mientras estas últimas formas de prejuicio son condenadas de forma universal por los gobiernos, la homofobia y la transfobia son en demasiadas ocasiones dejadas de lado*".[44]

105. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como diversos tratados internacionales ratificados por México obligan a todas las autoridades del país a combatir la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género, dentro de sus respectivos ámbitos de competencia.[45] La Organización de los Estados Americanos (OEA) ha emitido diversas resoluciones sobre esta materia. Ha condenado los actos de violencia y las violaciones de derechos humanos perpetrados en contra de las personas a causa de su orientación sexual e identidad de género, instando a los Estados a prevenirlos, investigarlos y castigarlos, asegurándoles a las víctimas la debida protección jurisdiccional en condiciones de igualdad.[46]

106. Ahora bien, el Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren la orientación sexual o la identidad de género, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, indica que cuando se habla de "sexo" se hace referencia a los cuerpos sexuados de las personas; esto es, a las características biológicas (genéticas, hormonales, anatómicas y fisiológicas) a partir de las cuales, las personas son clasificadas como machos o hembras al nacer.

107. El mismo protocolo, señala que, mientras que "sexo" se utiliza para hacer referencia al cuerpo sexuado y permite distinguir entre hombres, mujeres y personas intersex, "género" se refiere al resto de atributos que, social, histórica, cultural y geográficamente, se le han asignado a los hombres y a las mujeres. "Género" se utiliza para referirse a las características que social y culturalmente se consideran identificadas como "masculinas" y "femeninas". Sostener que una cuestión es el "sexo" y otra es el "género", implica que no hay una correlación necesaria entre el cuerpo con el que una persona nace y la personalidad que desarrolla o las funciones sociales que cumple.[47]

108. De igual forma, se entiende por identidad de género, de acuerdo con los Principios de Yogyakarta: "la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo (que podría involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma sea libremente escogida) y otras expresiones de género incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los modales".[48]

109. Por otra parte, la expresión de género, ha sido definida por la CIDH como "*la manifestación externa de los rasgos culturales que permiten identificar a una persona como masculina o femenina conforme a los patrones considerados propios de cada género por una determinada sociedad en un momento histórico determinado*".

110. Asimismo, de acuerdo a los Principios de Yogyakarta, la orientación sexual ha sido definida como "*la capacidad de cada persona de sentir una profunda atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un género diferente al suyo, o de su mismo género, o de*

---

[43] Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren la orientación sexual o la identidad de género. Suprema Corte de Justicia de la Nación. 2015.

[44] Navi, Pillay, "¿Crees que a todos se nos trata con igualdad? Plantéatelo de nuevo.", encontrado en el Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren la orientación sexual o la identidad de género. Suprema Corte de Justicia de la Nación. 2015.

[45] Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren la orientación sexual o la identidad de género. Suprema Corte de Justicia de la Nación. 2015.

[46] Ídem.

[47] Ídem.

[48] Encontrado en nota al pie del Informe especial de los Derechos Humanos de las personas lesbianas, gay, bisexuales, travestis, transgénero, transexuales e intersexuales (LGBTI) en México. CNDH, 2019, página 1.

más de un género, así como a la capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales con estas personas".[49] En este sentido, encontramos tres posibilidades:[50]

Heterosexualidad: Hace referencia a la capacidad de una persona de sentir una profunda atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un género diferente al suyo y a la capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales con estas personas.
Homosexualidad: Hace referencia a la capacidad de cada persona de sentir una profunda atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un mismo género y a la capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales con estas personas. Se observa una tendencia en el movimiento LGTBI a reivindicar el uso y referencia a los términos "lesbiana" (para hacer referencia a la homosexualidad femenina) y"gay" o "gai" (para hacer referencia a la homosexualidad masculina o femenina).
Bisexualidad: Hace referencia a la capacidad de una persona de sentir una profunda atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un género diferente al suyo, y de su mismo género, así como a la capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales con estas personas.

111. Así pues, se debe señalar que, no existe una relación necesaria ni entre el sexo de una persona o su identidad y expresión de género; ni entre estas últimas y su orientación sexual.[51] De la misma manera, no todas las personas que sienten una atracción sexual o afectiva por personas de su mismo género se identifican a sí mismas como "gay". "Gay" es también una identidad que no para todas las personas tiene sentido.[52]

112. El derecho de no discriminación que consagra el tercer párrafo del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos proscribe cualquier distinción motivada, entre otras, por razones de género y edad, condición social, religión o cualquiera otra análoga que atente contra la dignidad y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.[53] Se debe señalar que, el derecho a la igualdad y a la no discriminación, pudiera definirse como el derecho que tienen todas las personas para ser tratados en condiciones de igualdad jurídica, social, económica, cultural y de cualquier otra naturaleza, con pleno respeto a la dignidad humana.[54]

113. Así pues, tenemos que el derecho a la igualdad, es consagrado en el artículo 1° de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el cual hace mención a que "*Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros*." Asimismo, la misma Declaración, en su artículo 7°, señala la igualdad de las personas ante la ley, pues se consagra que: "*Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual*

---

[49] Principios de Yogyakarta. Principios sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género, marzo 2007, p.8, consultado el 18 de junio de 2014, encontrado en el Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren la orientación sexual o la identidad de género. Suprema Corte de Justicia de la Nación. 2015.

[50] Además de los heterosexuales, homosexuales y bisexuales, existen las personas que se auto-identifican como "pansexuales", por ser capaces de sentir una profunda atracción emocional, afectiva y sexual por las personas, con independencia de su género. Y también están las personas "asexuales", que por lo general no sienten una atracción sexual. Véase Cerankwoski, Karil June y Milks, Megan, "New Orientations: Asexuality and Its Implications for Theory and Practice", Feminist Studies, Vol. 36, No. 3, otoño 2010; Jacobson, Brian y Donatone, Brooke, "Homoflexibles, Omnisexuals, and Genderqueers: Group Work with Queer Youth in Cyberspace and Face-toface", Group, Vol. 33, No. 3, 2009. Encontrado en el Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren la orientación sexual o la identidad de género. Suprema Corte de Justicia de la Nación. 2015.

[51] Por ejemplo, no todas las mujeres consideradas "femeninas" serán heterosexuales, ni todas las "masculinas" serán lesbianas; y de manera equivalente, no todos los hombres "femeninos" serán homosexuales, ni los "masculinos" serán heterosexuales. Encontrado en Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren la orientación sexual o la identidad de género. Suprema Corte de Justicia de la Nación. 2015.

[52] Caballero, Marta; Campero, Lourdes; Herrera, Marta y Kendall Tamil, "HIV Prevention and Men Who Have Sex with Women and Men in México: Findings from a Qualitative Study with HIV-Positive Men", Culture, Health & Sexuality, Vol. 9, No. 5, 2007.

[53] IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN, PRINCIPIO DE. SU VIOLACIÓN POR LOS PARTICULARES. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. I.8o.C.41 K (9a.), Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 5, página 3771, Décima Época.

[54] Catálogo para la calificación de violaciones a derechos humanos, Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, p. 49, 2015.

protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación."

114. Es en la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos, específicamente en su artículo 22, en donde se incursiona en el concepto de la dignidad humana, al señalar que: *"Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad."*

115. Al respecto, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 2.1, establece: "Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social". Asimismo, el mismo Pacto, en su artículo 26, señala: "Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social".

116. Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, establece en su artículo 2.2: "Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social".

117. En este sentido, el Comité de Derechos Humanos, de la Organización de las Naciones Unidas, a través de su Observación General número 18, referente a la No Discriminación, en el punto 7, en referencia a la discriminación, señala que: *el Comité considera que el término "discriminación", tal como se emplea en el Pacto, debe entenderse referido a toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que se basen en determinados motivos, como la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional o social, la posición económica, el nacimiento o cualquier otra condición social, y que tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas".*

118. Ahora bien, en el sistema interamericano de protección de derechos humanos, tenemos que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 24, señala: "*Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley*".

119. Asimismo, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, señala en su artículo II, que: *Todas las personas son iguales ante la Ley y tienen los derechos y deberes consagrados en esta declaración sin distinción de raza, sexo, idioma, credo ni otra alguna".*

120. En el sistema jurídico nacional, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 1, *párrafo quinto, señala: "Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas".*

121. Al respecto, *los factores de prohibición de discriminar también se conocen en la doctrina constitucional y en diversos desarrollos jurídicos en sede internacional como categorías protegidas —o bien, categorías sospechosas—. Estas representan parámetros de*

identificación asociados a ciertas características personales en virtud de las cuales el goce y ejercicio de los derechos humanos puede verse limitado o excluido, ya sea por motivos históricos de discriminación, y por la prevalencia de ideas y concepciones estereotipadas en el plano político o social de una comunidad.[55]

122. *Suelen denominarse así, precisamente porque cualquier acto de diferenciación que se sustente en alguno de tales motivos es susceptible de cuestionamiento por contrastar con los parámetros constitucionales de la igualdad. De esta manera, se presume una diferencia de trato injustificable si aparecen involucradas las categorías enunciadas por la Constitución y los tratados internacionales, o incluso, de manera no expresa, cualquier otra que «atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas»*.[56]

123. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de su tesis aislada, con número de registro 2007924, de la Primera Sala, en materia Constitucional, respecto a las categorías sospechosas, se pronunció de la siguiente manera:

> Época: Décima Época
> Registro: 2007924
> Instancia: Primera Sala
> Tipo de Tesis: Aislada
> Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
> Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I
> Materia(s): Constitucional
> Tesis: 1a. CCCLXXXIV/2014 (10a.)
> Página: 720
>
> IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. NOTAS RELEVANTES QUE EL OPERADOR DE LA NORMA DEBE CONSIDERAR AL EXAMINAR LA CONSTITUCIONALIDAD DE UNA MEDIDA A LA LUZ DE DICHOS PRINCIPIOS, FRENTE A LAS LLAMADAS "CATEGORÍAS SOSPECHOSAS", A FIN DE NO PROVOCAR UN TRATO DIFERENCIADO O UNA DISCRIMINACIÓN INSTITUCIONAL.
>
> Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que las distinciones basadas en alguno de los criterios enunciados en el último párrafo del artículo 1o. constitucional, también conocidas como "categorías sospechosas" (el origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, **las preferencias sexuales**, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas), requieren que el operador de la norma realice un escrutinio estricto de la medida para examinar su constitucionalidad a la luz del principio de igualdad. Al respecto, es de señalar que tanto la Constitución como los tratados internacionales en materia de derechos humanos suscritos por el Estado Mexicano, prevén la posibilidad de otorgar un trato desigual a quienes no se encuentran en una paridad frente a los otros sujetos, si dicho trato implica una distinción justificada; pero si, por el contrario, la medida adoptada carece de razonabilidad, entonces será excluyente y, por ende, discriminatoria. Esto es, si bien la igualdad de trato implica la eliminación de distinciones o exclusiones arbitrarias prohibidas por la Constitución, lo cierto es que determinadas distinciones pueden ser favorecedoras y encontrarse justificadas, como ocurre con las acciones positivas, que buscan dar preferencia a sectores históricamente marginados y vulnerables para compensar las desventajas que sufren. De ahí que la interpretación directa del artículo 1o. constitucional, en torno al principio de igualdad, no sólo requiere una interpretación literal y extensiva, sino que, ante su lectura residual a partir del principio pro persona, como aquella interpretación que sea más favorable a la persona en su protección, subyace como elemento de aquél, el de apreciación del operador cuando el sujeto implicado forma parte de una categoría sospechosa, para precisamente hacer operativa y funcional la protección al sujeto desfavorecido con un trato diferenciado; de lo contrario, esto

---

[55] Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos comentada. José Ramón Cossío Díaz, Coordinador. México, 2017.
[56] Ídem.

> es, partir de una lectura neutra ante supuestos que implican una condición relevante, como la presencia de categorías sospechosas, constituiría un vaciamiento de tal protección, provocando incluso un trato discriminatorio institucional, producto de una inexacta aplicación de la ley.

124. Por ello, como se puede observar, las preferencias sexuales de las personas, constituyen una categoría sospechosa. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de la resolución sobre el caso de Atala Riffo y Niñas vs Chile, que se refiere a la responsabilidad internacional de dicho Estado por el trato discriminatorio y la interferencia arbitraria en la vida privada y familiar de Karen Atala Riffo, debido a su orientación sexual, en el proceso judicial que derivó en el retiro del cuidado y custodia de sus hijas. La Corte Interamericana dejó establecido que la orientación sexual y la identidad de género de las personas son categorías protegidas por la Convención Americana sobre Derechos Humanos; por ello, consideró contrarias a ésta cualquier norma, acto o práctica discriminatoria basada en la orientación sexual de la persona por parte de autoridades estatales o por particulares, que puedan disminuir o restringir, de modo alguno, los derechos de una persona.[57]

125. De igual forma, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en su artículo 4 establece: "*Queda prohibida toda práctica discriminatoria que tenga por objeto o efecto impedir o anular el reconocimiento o ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades en términos del artículo 1o. constitucional y el artículo 1, párrafo segundo, fracción III de esta Ley*".

126. Asimismo, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, señala en su artículo 9, fracción XXVIII: "Con base en lo establecido en el artículo primero constitucional y el artículo 1, párrafo segundo, fracción III de esta Ley se consideran como discriminación, entre otras: […] XVIII. **Realizar o promover violencia física**, sexual, o psicológica, patrimonial o económica por la edad, género, discapacidad, apariencia física, forma de vestir, hablar, gesticular o **por asumir públicamente su preferencia sexual**, o por cualquier otro motivo de discriminación […]".

127. En el ámbito jurídico local, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, señala en su artículo 21, párrafo cuarto: "*Queda prohibida toda forma de discriminación motivada por el origen étnico, nacional o regional, el género, la raza, el color de piel, las características físicas, el idioma, el estado civil, la edad, la profesión, el trabajo desempeñado, la condición social o económica, las discapacidades, las condiciones de salud, el estado de embarazo, las costumbres, **las preferencias sexuales**, las ideologías o creencias religiosas, la calidad migratoria o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas".*

128. De igual forma, la Ley para Prevenir y Erradicar toda forma de discriminación en el Estado de Zacatecas, contempla en su artículo 3: "*Queda prohibida toda forma de discriminación motivada por el origen étnico, nacional o regional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social o económica, las condiciones de salud, las opiniones, **las preferencias sexuales**, el estado civil, el trabajo desempeñado, las costumbres, la raza, las ideologías o creencias religiosas, la migración, la apariencia física, modificaciones estéticas corporales o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Toda discriminación o toda intolerancia constituyen un agravio a la dignidad humana y un retroceso a su propia condición, que deben combatirse*".

129. Asimismo, el artículo 4 de la referida Ley, establece que: "*Para los efectos de esta Ley se entiende por discriminación toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico, nacional o regional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social o económica, las condiciones de salud, el embarazo, la lengua, las ideologías o creencias*

---

[57] Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Atala Riffo y Niñas vs Chile. Recuperado de http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_239_esp.pdf, encontrado en el Informe Especial sobre la situación de los derechos humanos de las personas lesbianas, gay, bisexuales, travestis, transgénero, transexuales e intersexuales (LGBTI) en México, CNDH, 2019.

religiosas, las opiniones, ***las preferencias sexuales****, el estado civil, el trabajo desempeñado, las costumbres, la raza, la apariencia física, modificaciones estéticas corporales o cualquier otra, tenga por efecto impedir, menoscabar o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales de las personas, y la igualdad real de oportunidades de los individuos*".

130. Ahora bien, una vez que se ha contextualizado la situación de las personas pertenecientes a la comunidad **LGBTI+**, se procederá a analizar la vulneración al derecho a la integridad y seguridad personal que sufrió **Q1**, el cual, a través de su queja, se reconoce como perteneciente a la comunidad **LGBTI+** que, como se ha dicho en la presente resolución, forma parte de las "categorías sospechosas", las cuales, históricamente, han visto vulnerados sus derechos.

131. Así pues, señaló el quejoso que, una vez que se encontraba detenido a bordo de una patrulla de la Dirección de Seguridad Pública de Villanueva, Zacatecas, fue objeto de lesiones propinadas por elementos de dicha corporación policiaca, atribuyendo éstas a una discriminación por su preferencia sexual, en virtud a que recibió insultos como "*maricón*", "*joto*" o "*pinches jotitos*".

132. De igual forma, manifestó **Q1**, que una vez que se encontraba a bordo de la patrulla, dijo: "*wey, porqué nos están deteniendo si no estamos haciendo nada*", recibiendo en contestación un golpe en el rostro, y el señalamiento que no es un "*wey y que es un* ***OFICIAL***". Asimismo, señaló que un **OFICIAL** le decía maricón y joto, mientras le propinaba diversos golpes en su cuerpo, para lo cual el quejoso le contestó que sí lo era, pero eso no tenía nada que ver, recibiendo a cambio más golpes.

133. Se cuenta de igual forma, con la comparecencia realizada por **A1**, ante personal de esta Comisión, quien en relación al hecho victimizante que padeció **Q1**, manifestó que, efectivamente, al estar ya detenidos a bordo de una patrulla de la Dirección de Seguridad Pública de Villanueva, Zacatecas, su hermano **Q1**, se refirió a un **OFICIAL** de la con la expresión "*wey, por qué nos detienes*", recibiendo a cambio golpes por parte del elemento.

134. De la misma manera, **A1**, manifiesta que escuchó que el **OFICIAL** le decía a su hermano **Q1,** que le pegaba por "*joto*", solicitando el joven **A1**, que cesaran los golpes a su hermano, respondiéndole que ahora sí hasta pedía las cosas por favor.

135. Por otra parte, fue solicitado un informe de autoridad al **DOCTOR MIGUEL ÁNGEL TORRES ROSALES**, otrora Presidente Municipal de Villanueva, Zacatecas, el cual, dio contestación el 20 de noviembre de 2019, adjuntando los partes informativos rendidos por el **COMANDANTE IVÁN SÁNCHEZ NÚÑEZ**, así como por los **OFICIALES HÉCTOR MANUEL MUÑOZ CALVILLO, JULIO CÉSAR ESQUIVEL PADILLA** y **JUAN ANTONIO DÍAZ**, todos adscritos a la Dirección de Seguridad Pública de Villanueva, Zacatecas.

136. En relación al derecho a la integridad y seguridad personal de los quejosos, el **COMANDANTE IVÁN SÁNCHEZ NÚÑEZ**, de la Dirección de Seguridad Pública de Villanueva, Zacatecas, refirió que condujo la patrulla que trasladó a los detenidos a las instalaciones de la referida Dirección, señalando que los quejosos no se estuvieron tranquilos en ningún momento, dándose golpes en la lámina de la patrulla, además de forcejear con los elementos de Seguridad Pública de Villanueva, Zacatecas.

137. Por su parte, el **C. JULIO CÉSAR ESQUIVEL PADILLA,** elemento de la Dirección de Seguridad Pública de Villanueva, Zacatecas, señaló en su parte informativo que, una vez que estuvieron los quejosos a bordo de la patrulla de la referida Dirección, uno de ellos, quien corresponde a **Q1**, trataba de darles cabezazos y los ofendía durante el traslado, sin embargo, éste se golpeaba contra la unidad. Asimismo, señaló que **Q1**, los llamaba homofóbicos, haciéndole la aclaración, de acuerdo a la versión de **JULIO CÉSAR ESQUIVEL PADILLA**, que su detención no obedecía a sus preferencias sexuales.

138. Así pues, se cuenta con el parte informativo emitido por el **C. HÉCTOR MANUEL MUÑOZ CALVILLO**, elemento de la Dirección de Seguridad Pública de Villanueva,

Zacatecas, en la cual señala que, al estar realizando el traslado de los detenidos a la Dirección, a bordo de una patrulla, éstos no dejaban de insultarlos, por lo que optó, según sus palabras, por ponerle un par de cachetadas. Con esta declaración, se aprecia que, se tiene una normalización de la violencia por parte del **OFICIAL**, el cual, de acuerdo a su versión, al recibir insultos por parte de los detenidos, lo que seguramente debe ser frecuente, éste reaccionó haciendo uso de la violencia física en contra de **Q1**, el cual, se encontraba esposado y a bordo de una patrulla de la Dirección de Seguridad Pública, dejándolo indefenso de poder evitar cualquier contacto físico, al encontrarse inmovilizado de sus manos, dejando a la voluntad del elemento, el hacer uso de la violencia física, tal y como lo realizó, al admitir el **C. HÉCTOR MANUEL MUÑOZ CALVILLO,** elemento de la Dirección de Seguridad Pública de Villanueva, Zacatecas, que le "*puso un par de cachetadas*", sin embargo, como se verá a lo largo del análisis del presente capítulo, no se limitó a ese par de cachetadas.

139. De igual forma, de la comparecencia recabada por parte de personal de este Organismo al **C. JUAN ANTONIO DÍAZ**, elemento de la Dirección de Seguridad Pública de Villanueva, Zacatecas, se desprende que, en relación a las lesiones de **Q1**, señaló: *"[…] Y fue cuando observé que mi compañero **HÉCTOR** le propinó varios golpes al quejoso y nosotros le decíamos que se calmara […]*" (sic). Por lo que, existe un señalamiento claro en indicar que su compañero **HÉCTOR**, refiriéndose a **HÉCTOR MANUEL MUÑOZ CALVILLO**, elemento de la corporación policiaca municipal, golpeó al quejoso a grado tal, que tuvieron que ser sus propios compañeros quienes le solicitaron que se tranquilizara. Además de lo anterior, el **C. JUAN ANTONIO DÍAZ**, señaló que escuchó que el **OFICIAL HÉCTOR MANUEL MUÑOZ CALVILLO**, y uno de los detenidos, estaban discutiendo por el "sexo" de uno de ellos.

140. De la misma manera, de la comparecencia rendida ante personal de esta Comisión, por parte de **JULIO CÉSAR ESQUIVEL PADILLA**, elemento de la Dirección de Seguridad Pública de Villanueva, Zacatecas, se desprende que, en el trayecto hacia la Dirección de referencia, los detenidos continuaron insultando a los elementos. De igual forma, señala que uno de los detenidos forcejeaba con el **OFICIAL HÉCTOR MANUEL MUÑOZ CALVILLO**, elemento de la referida corporación policiaca, al cual le preguntó, que si le estaba pegando por ser "*puto*", respondiendo dicho elemento "*ya cállate la boca pinche maricón*", señalando el quejoso que si le estaba haciendo eso por ser "*maricón*", contestando el **OFICIAL HÉCTOR MANUEL MUÑOZ CALVILLO**, que sí, "*que ya se callara el hocico*". Además, **JULIO CÉSAR ESQUIVEL PADILLA**, elemento de la Dirección de Seguridad Pública de Villanueva, Zacatecas, refirió que **HÉCTOR MANUEL MUÑOZ CALVILLO**, le dio varios golpes con el puño cerrado a uno de los **detenidos**, teniendo que comentarle que se tranquilizara. Esto, al igual que la declaración del **OFICIAL JUAN ANTONIO DÍAZ**, es coincidente en señalar directamente al **OFICIAL HÉCTOR MANUEL MUÑOZ CALVILLO**, de haberle inferido golpes a **Q1**.

141. Además de lo anterior, se cuenta con la comparecencia de **JULIO CÉSAR ESQUIVEL PADILLA**, elemento de la Dirección de Seguridad Pública de Villanueva, Zacatecas, de la que se desprende que, el **COMANDANTE IVÁN SÁNCHEZ NÚÑEZ**, se percató de los hechos que se han descrito, lo cual derivó en un llamado de atención al **OFICIAL HÉCTOR MANUEL MUÑOZ CALVILLO**, a quien el **COMANDANTE IVÁN SÁNCHEZ NÚÑEZ**, le comentó que no debió de haber golpeado al detenido, ya que éste lo estuvo viendo.

142. Sin embargo, el **COMANDANTE IVÁN SÁNCHEZ NÚÑEZ**, de la Dirección de Seguridad Pública de Villanueva, Zacatecas, en su comparecencia rendida ante personal de esta Comisión, negó haberse percatado de los hechos, lo cual nos lleva a deducir que se pretendía encubrir las acciones vulnerantes de derechos humanos, cometidas por el **OFICIAL HÉCTOR MANUEL MUÑOZ CALVILLO**, lo cual, es una actitud totalmente reprochable, al tratar de impedir el acceso al derecho a la verdad por parte de esta Comisión, intentando que se llevara a cabo de manera correcta la sustanciación del expediente. Esto en relación a que, en su comparecencia, señaló que cuando desciende de la patrulla, observa que uno de los detenidos, tenía golpes en los ojos, a lo cual el **OFICIAL HÉCTOR MANUEL MUÑOZ CALVILLO**, le informa que fue en la detención. Con lo cual, es omiso en

su actuar y además, consintió el hecho transgresor de derechos humanos, cometido por el referido elemento de la Dirección de Seguridad Pública.

143. Ahora bien, la **LICENCIADA MARA PATRICIA SANDOVAL GÓMEZ**, Jueza Comunitaria, adscrita a la Dirección de Seguridad Pública de Villanueva, Zacatecas, al igual que realizó con **A1**, en su hoja de internación, con número de folio 533, estableció que **Q1**, sí presentaba lesiones, sin embargo, no se cuenta con certificado médico que especifique cuáles fueron tales lesiones.

144. No obstante a no contar con el certificado médico que se tuvo que haber recabado en la Dirección de Seguridad Pública de Villanueva, Zacatecas, se tiene copia del expediente clínico del **C. Q1**, correspondientes a la valoración y atención recibida en el Hospital Rural No. 51, del Instituto Mexicano del Seguro Social, en Villanueva, Zacatecas, remitido a esta Comisión por parte del **DOCTOR ISIDRO OROZCO LÓPEZ**, Director de dicho nosocomio.

145. Así pues, en la nota de ingreso a piso, en el Hospital Rural No. 51, del Instituto mexicano del Seguro Social, en Villanueva, Zacatecas, recabada por la **DOCTORA LUCERO GUERRA SOTELO**, se observa que **Q1**, señaló que acudió a urgencias en virtud a haber sido agredido, primero de manera verbal y posteriormente física, recibiendo golpes con puños en cara y tórax anterior, tirándolo al piso y cuestionándolo por sus preferencias sexuales. Asimismo, refirió que continuó siendo objeto de agresiones físicas aún y estando en el suelo, ya que fue golpeado con las rodillas en el pecho, a la vez que recibía insultos homofóbicos, como "*maricón*".

146. De igual forma, en dicha nota de ingreso, recabada por la **DOCTORA LUCERO GUERRA SOTELO**, se estableció que **Q1**, se encontraba policontundido, estableciendo que el quejoso tenía: "*[…] edema palpebral de ojo derecho, conjuntiva con sangrado de manera generalizada, edema y eritema de hemicara derecha, huellas de sangrado en fosa nasal derecha, […] escoriaciones dermoepidérmicas múltiples en tórax anterior, además de eritema, […] dolor a la palpación de manera generalizada, […] extremidades ambas con huellas de violencia que consisten en eritema y leves escoriaciones […]*". Asimismo, se estableció que dichas lesiones "*[…] pueden comprometer la función y visión a mediano plazo […]*".

147. De la misma manera, se observa que, en la nota de egreso de **Q1**, de fecha 29 de octubre de 2019, se estableció que ésta se debía a mejoría clínica, sin embargo, se señaló lo siguiente: "*Se trata de paciente masculino de 23 años de edad, el cual ingresa hace 2 días tras presentar agresión física por parte de varios sujetos, ocasionando múltiples lesiones. A la exploración física se encuentra neurológicamente integro, orientado, pupilas isométricas, dismórfica, hemicara derecha con presencia de edema y hematoma en región palpebral, además de derrame intraocular, mucosas bien hidratadas, con adecuada coloración de tegumentos, mucosa oral bien hidratada, sin lesiones, sin datos de ingurgitación yugular, tórax con ruidos respiratorios presentes, con dolor a nivel de arcos costales a la inspiración* […]".

148. Aunado a lo anterior, se cuenta con certificado médico, practicado a **Q1**, por parte de la **DOCTORA NORMA ALICIA GUARDADO MARTÍNEZ**, Perito Médico Legista, adscrita a la Dirección General de Servicios Periciales, de la Fiscalía General de Justicia del Estado, en fecha 30 de octubre de 2019, en donde se estableció la presencia de las siguientes lesiones:

> "[…] 1. Una equimosis morada amarillenta de cuatro por cinco (4x5) centímetros, localizada en la región bipalpebral derecho.
> 2. Hemorragia conjuntival en ángulo externo ojo derecho.
> 3. Equimosis rojiza de cuatro por uno (4x1) centímetros, localizada en mucosa oral de cavidad derecha.
> 4. Equimosis de coloración verde amarillenta de diez por diez (10x10) centímetros, localizada en cara anterior línea media de tórax.
> 5. Equimosis de uno por uno (1x1) centímetros, localizada en tercio medio cara anterior de brazo derecho.
> 6. Equimosis morada de siete por cinco (7x5) centímetros, localizada en cara anterior de muñeca izquierda.

> 7. Cinco escoriaciones de uno (1) centímetro localizadas en región pectoral derecha […]".

149. Así pues, se puede aseverar que, las lesiones presentadas por parte de **Q1**, fueron producidas por el **OFICIAL HÉCTOR MANUEL MUÑOZ CALVILLO**, elemento de la Dirección de Seguridad Pública de Villanueva, Zacatecas, el día 26 de octubre de 2019, durante el traslado a dicha Dirección, las cuales fueron más que "*un par de cachetadas*", como lo estableció el **OFICIAL HÉCTOR MANUEL MUÑOZ CALVILLO**, en su parte informativo, ya que las lesiones fueron de grado tal, que **Q1**, tuvo que permanecer hospitalizado 3 días, hasta que evolucionó de manera favorable de las lesiones y fue dado de alta del Hospital Rural No. 51, del Instituto Mexicano del Seguro Social, en Villanueva, Zacatecas, lo cual, hace evidente el uso excesivo de la fuerza pública hacia una persona que se encontraba en desigualdad de circunstancias, puesto que ya estaba asegurada por elementos policiacos.

150. Hay que hacer mención a que, **Q1,** al salir de las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública de Villanueva, Zacatecas, acudió de manera inmediata al nosocomio de referencia, lugar en el que, fue tratado médicamente de las lesiones producidas por el **OFICIAL HÉCTOR MANUEL MUÑOZ CALVILLO**, quien realizó un reconocimiento expreso de su responsabilidad, al señalar que le dio "un par de cachetadas" a **Q1**, siendo que, como ya se señaló, fue más que eso, a grado tal que, tuvo que acudir al Hospital Rural No. 51, del Instituto Mexicano del Seguro Social, en Villanueva, Zacatecas, en donde permaneció hospitalizado 3 días.

151. Entonces, resulta evidente que, la carencia de personal médico en la Dirección de Seguridad Pública municipal de Villanueva, Zacatecas, se traduce en la falta de certificados clínicos de las personas puestas a disposición en dicha Dirección, lo cual, resulta en una violación a los derechos humanos de las personas privadas de su libertad, así como al debido proceso al cual deben de estar sujetas.

152. Ahora bien, se puede afirmar que, tales lesiones, sí se realizaron en un contexto de discriminación, derivado de las preferencias sexuales de **Q1**, lo cual, denota una falta de capacitación por parte del **OFICIAL HÉCTOR MANUEL MUÑOZ CALVILLO**, elemento de la Dirección de Seguridad Pública de Villanueva, Zacatecas, así como una evidente homofobia, al hacer el pronunciamiento de palabras en sentido peyorativo, como "*maricón*" o "*puto*". Esta afirmación se hace en virtud a que, además de la versión proporcionada por los **CC. Q1** y **A1**, ambos de apellidos […], se cuenta con el testimonio del **OFICIAL JUAN ANTONIO DÍAZ**, el cual señaló que observó que su compañero **HÉCTOR MANUEL MUÑOZ CALVILLO**, discutía con uno de los detenidos por su "*sexo*", a lo cual, evidentemente se refiere a sus preferencias sexuales. Asimismo, el **OFICIAL JULIO CÉSAR ESQUIVEL PADILLA**, señaló que el **ELEMENTO HÉCTOR MANUEL MUÑOZ CALVILLO**, se refirió a uno de los detenidos con la expresión "*ya cállate la boca pinche maricón*", admitiendo además que, sí estaba golpeando al detenido por ser "*puto*", por ser "*maricón*".

153. Así pues, es evidente que, la vulneración del derecho a la integridad y seguridad personal de **Q1**, se originó por un acto de discriminación por las preferencias sexuales de éste, cometido por el **OFICIAL HÉCTOR MANUEL MUÑOZ CALVILLO**, elemento de la Dirección de Seguridad Pública de Villanueva, Zacatecas, transgrediendo de esta manera, el derecho al trato digno y a la no discriminación, de **Q1**.

154. De acuerdo al Informe especial sobre la situación de los derechos humanos de las personas lesbianas, gay, bisexuales, travestis, transgénero, transexuales e intersexuales en México, las personas **LGBTI+** o aquellas que son percibidas como tales, son víctimas de diversos tipos de exclusión, segregación, persecución y otras violaciones a sus derechos humanos.[58] De igual manera, señala que la discriminación es un fenómeno social que se reproduce en diversos espacios con distintas formas y con mayor o menor medida en todo el mundo. Implica una multiplicidad de prácticas que se dan de manera cotidiana y que violentan los derechos humanos de las personas por diferentes motivos. Por lo que, la

---

[58] Informe especial sobre la situación de los derechos humanos de las personas lesbianas, gay, bisexuales, travestis, transgénero, transexuales e intersexuales en México, CNDH, 2019.

respuesta internacional recae en contemplar el derecho a la no discriminación, como una norma de *ius cogens*.[59]

155. Asimismo, señala el Informe especial sobre la situación de los derechos humanos de las personas lesbianas, gay, bisexuales, travestis, transgénero, transexuales e intersexuales en México, en nuestro país las personas **LGBTI+,** enfrentan una discriminación estructural.[60] Por esa razón, es que esta Comisión rechaza de manera enérgica, cualquier acto de discriminación en contra de las personas **LGBTI+**, y contra cualquier otro grupo social.

156. Finalmente, respecto al uso de la fuerza pública, como se mencionó en el apartado que analizó las lesiones de **A1**, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, establece cuatro parámetros esenciales que justifiquen el uso de la fuerza de los elementos captores: a) Legitimidad, b) Necesidad, c) Idoneidad y d) Proporcionalidad. Mismos que son coincidentes con los establecidos en el Manual para el Uso de la Fuerza, como en los Lineamientos Generales para la Regulación del Uso de la Fuerza Pública por las Instituciones Policiales de los Órganos Desconcentrados en la Secretaria de Seguridad Pública[61]. Respecto de **Q1**, debe señalarse lo siguiente:

> a) El principio de necesidad, de acuerdo a lo establecido en el artículo 10 de los Lineamientos Generales para la Regulación del Uso de la Fuerza Pública por las Instituciones Policiales de los Órganos Desconcentrados en la Secretaría de Seguridad Pública, "*significa que sólo cuando sea estrictamente necesario e inevitable los integrantes emplearán la fuerza para impedir la perturbación del orden público y para restablecerlo*". En referencia a **Q1**, se acreditó que éste presentó lesiones, producidas por los elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Villanueva, Zacatecas, sin que éstos, a lo largo de la investigación, hayan justificado la necesidad de violentar físicamente al agraviado, puesto que, **Q1**, al igual que su hermano **A1**, en todo momento desde su detención, se encontró esposado, por lo cual, no representaba un peligro real e inminente para los elementos policiacos.
>
> b) El principio de proporcionalidad, de acuerdo al artículo 11 de los Lineamientos señalados en el inciso anterior, establece que "*implica que el uso de la fuerza será adecuado y en proporción a la resistencia o agresión recibida, atendiendo a su intensidad, duración y magnitud. Este principio impone que no se deberá actuar con todo el potencial de una unidad si las personas contra las que se usa la fuerza se encuentran en una situación cuantitativa y cualitativa inferior. En consecuencia, la fuerza empleada debe ser prudente y limitada, sólo para alcanzar el control y neutralización de la agresión. El uso de la fuerza está en directa relación con los medios que emplean las personas que participan en la agresión, su número y grado de hostilidad*". Al respecto, debe señalarse que, el número de elementos policiacos intervinientes, es superior al número de personas detenidas, ya que **A1** y **Q1**, solamente eran dos personas, mientras que se tiene acreditada la participación de 7 elementos de la Dirección de Seguridad Pública municipal de Villanueva, Zacatecas, quienes, para ejercer el oficio que desempeñan, tuvieron que haber sido capacitados para reaccionar a las diversas situaciones que por la naturaleza de su empleo pudieran encontrar, es decir, tanto cuantitativa, como cualitativamente, **A1** y **Q1**, se encontraban en inferioridad, respecto de los elementos aprehensores.
>
> c) El principio de racionalidad en el uso de la fuerza pública, de acuerdo al artículo 12 de los Lineamientos antes referidos, señala que: "*implica que ésta será empleada de acuerdo a elementos objetivos y lógicos con*

---

[59] Ídem.

[60] Ídem.

[61] Lineamientos Generales para la Regulación del Uso de la Fuerza Pública por las Instituciones Policiales de los Órganos Desconcentrados en la Secretaria de Seguridad Pública, encontrado en: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php%3Fcodigo%3D5244759%26fecha%3D23/04/2012

relación a la situación hostil que se presenta, a efecto de valorar el objetivo que se persigue, las circunstancias del caso y las capacidades tanto del sujeto a controlar como la de los propios Integrantes". Se debe señalar que, en caso de que los oficiales de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Villanueva, Zacatecas, hayan determinado contar con elementos suficientes para llevar a cabo la detención de los quejosos, ésta se tuvo que haber realizado mediante la utilización de las técnicas adecuadas, para lo cual, tuvieron que haber recibido una capacitación profesional para desempeñarse en el cargo que ocupan. Además de ello, hay que hacer el señalamiento que, **A1** y **Q1**, fueron esposados al momento de su detención, por parte de los elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Villanueva, Zacatecas, por lo cual, no representaba una verdadera situación hostil, ya que los agraviados se encontraban completamente controlados por parte de los elementos policiacos, por lo que, el uso de la fuerza, ejercida por éstos, en contra de los quejosos, fue a todas luces irracional y alevosa.

d) El principio de oportunidad en el uso de la fuerza pública, de acuerdo al artículo 13 de los Lineamientos Generales para la Regulación del Uso de la Fuerza Pública por las Instituciones Policiales de los Órganos Desconcentrados en la Secretaría de Seguridad Pública, "*tenderá a la actuación policial inmediata para evitar o neutralizar un daño o peligro inminente o actual, que vulnere o lesione la integridad, derechos o bienes de las personas, las libertades, la seguridad ciudadana o la paz pública*". En este sentido, de acuerdo a la investigación realizada por parte de esta Comisión, **A1** y **Q1**, no representaban un daño o peligro inminente, ni para los elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Villanueva, Zacatecas, ni para terceros, puesto que, en todo momento, los elementos policiacos, los superaban en número, y estos, están capacitados para intervenir en cualquier situación de seguridad, por lo que, existió un uso excesivo de la fuerza.

157. Con los elementos aportados con anterioridad, se tiene por cierta la vulneración del derecho a la integridad y seguridad personal, así como el derecho a la igualdad y no discriminación, de **Q1**, cometida por parte del **OFICIAL HÉCTOR MANUEL MUÑOZ CALVILLO**, elemento de la Dirección de Seguridad Pública de Villanueva, Zacatecas, al haberse comprobado que éste, ejerció actos de discriminación por motivos de género, en contra de **Q1,** por el hecho de que el quejoso, pertenece a la comunidad **LGBTI+**, lo cual, lo llevó a menoscabar y a transgredir los derechos de éste.

VIII. CONCLUSIONES DEL CASO.

1. En la presente Recomendación, se comprobó que existieron violaciones a los derechos humanos de **Q1 y A1,** ambos de apellidos […]. Siendo estos vulnerados, en un primer momento, en su derecho a la legalidad y seguridad jurídica, en relación al derecho a no ser objeto de detenciones ilegales y arbitrarias, cometidas por parte de los **OFICIALES PEDRO MANUEL ECHEVERRÍA HERNÁNDEZ, JUAN ANTONIO RUÍZ**, **OVAD CÉSAR ECHEVERRÍA HERNÁNDEZ, GONZALO CASTRO CUEVAS** y **JULIO CÉSAR ESQUIVEL PADILLA**, elementos de la Dirección de Seguridad Pública de Villanueva, Zacatecas, quienes participaron en la detención de **Q1** y **A1,** ambos de apellidos […], sin que hayan podido justificar a lo largo de la sustanciación del presente expediente, el motivo por el cual fueron detenidos. Además de que, se comprobó la arbitrariedad en la detención, al no haber seguido el protocolo de detenciones, en agravio de **Q1** y **A1**.

2. De igual forma, en la presente Recomendación, se acreditó la vulneración al derecho a la legalidad y seguridad jurídica, de **A1** y **Q1,** cometido por parte de la **LICENCIADA MARA PATRICIA SANDOVAL GÓMEZ**, Jueza Calificadora, adscrita a la Dirección de Seguridad Pública municipal de Villanueva, Zacatecas, al no haber actuado de acuerdo al

procedimiento administrativo, y no haber certificado médicamente a los agraviados, aún y cuando a ella le constó a simple vista, que presentaban lesiones.

3. Asimismo, se comprobó la vulneración al derecho a la integridad y seguridad personal, de **Q1 y A1,** ambos de apellidos […]. En el caso de las lesiones que presentó **Q1**, estas son atribuibles al **OFICIAL HÉCTOR MANUEL MUÑOZ CALVILLO**, elemento de la Dirección de Seguridad Pública de Villanueva, Zacatecas. Mientras que, las lesiones que presentó **A1**, son atribuibles a los elementos captores, siendo estos los **CC. JULIO CÉSAR ESQUIVEL PADILLA** y **JUAN ANTONIO DÍAZ,** elementos de la referida Dirección.

4. Finalmente, se demostró la responsabilidad del **OFICIAL HÉCTOR MANUEL MUÑOZ CALVILLO**, elemento de la Dirección de Seguridad Pública de Villanueva, Zacatecas, en referencia a la vulneración del derecho a la igualdad y a la no discriminación, de **Q1**, en virtud a que se tienen acreditadas las frases homofóbicas proferidas por el funcionario hacia el agraviado, lo cual denota una profunda discriminación por las preferencias sexuales de éste.

VIII. REPARACIONES.

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 51 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, al acreditarse violación a los derechos humanos de **Q1** y **A1**, ambos de apellidos […], atribuible a servidores públicos municipales, la Recomendación formulada al respecto debe incluir las medidas que procedan para lograr la efectiva restitución a las personas afectadas en sus derechos.

2. Dicha reparación, de conformidad con los *Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones*, adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 2005, las violaciones de derechos humanos deben contemplar, de forma apropiada y proporcional a la gravedad de ésta, una reparación plena y efectiva, pues "[u]na reparación adecuada, efectiva y rápida tiene por finalidad promover la justicia, remediando las violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos o las violaciones graves del derecho internacional humanitario."[62] Para ello, "[l]a reparación ha de ser proporcional a la gravedad de las violaciones y al daño sufrido"[63]; esto es, "…una reparación plena y efectiva…", "…en las formas siguientes: restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición."[64] En el caso concreto, ante la pérdida fatal, no es posible solicitar la restitución de los derechos humanos conculcados.

3. Las reparaciones se contemplan también en la Ley General de Víctimas, en sus artículos 1, último párrafo, 7, fracciones I y II, y particularmente en el texto legal del artículo 26, que establece que: "Las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera oportuna, plena diferenciada, transformadora, integral y efectiva por el daño que han sufrido como consecuencia del delito o hecho victimizante que les ha afectado o de las violaciones de derechos humanos que han sufrido, comprendiendo medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y medidas de no repetición, además de lo previsto en el artículo 27 del citado ordenamiento legal.

A) <u>De la indemnización</u>.

---

[62] ONU. Principio XV, de los Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, en su 60/147 Resolución aprobada por la Asamblea General el 16 de diciembre de 2005, https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/RemedyAndReparation.aspx, fecha de consulta 06 de mayo de 2019, párr. 15.

[63] Ídem.

[64] Ibidem. Párr. 18.

1. La indemnización debe de concederse, de forma apropiada y proporcional a la gravedad de la violación y a las circunstancias de cada caso, por todos los perjuicios económicamente evaluables que sean consecuencia de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos o de violaciones graves del derecho internacional humanitario, tales como: el daño físico o mental; la pérdida de oportunidades, en particular las de empleo, educación y prestaciones sociales; los daños materiales y la pérdida de ingresos, incluido el lucro cesante; los perjuicios morales; los gastos de asistencia jurídica o de expertos, medicamentos y servicios médicos y servicios psicológicos y sociales.[65]

2. En el caso motivo de esta Recomendación, es procedente el pago de una indemnización, por las afectaciones físicas y emocionales causadas a los **CC. Q1** y **A1**, ambos de apellidos […], quienes deberán inscribirse en el Registro Estatal de Víctimas, a fin de que tengan acceso a los servicios y al fondo de atención previsto en la Ley de Atención a Víctimas del Estado de Zacatecas.

B) <u>De la rehabilitación</u>.
1. Las medidas de rehabilitación buscan reducir los padecimientos físicos y psicológicos de las víctimas, a través del otorgamiento de servicios atención médica y psicológica, así como servicios jurídicos y sociales[66].

2. En el contexto que nos ocupa, deberán valorarse los servicios de atención médica, psicológica, jurídica y social que deberán otorgarse a los **CC. Q1** y **A1**, ambos de apellidos […]**,** a través de la Comisión Ejecutiva de Atención Integral a Víctimas del Estado de Zacatecas.

C) <u>De las medidas de satisfacción</u>.
1. Estas medidas, contemplan la verificación de los hechos y la revelación de la verdad, así como la aplicación de sanciones jurídicas o administrativas a los responsables de las violaciones a los Derechos Humanos[67].

2. Por lo anterior se requiere que, el H. Ayuntamiento de Villanueva, Zacatecas, a través del Órgano Interno de Control, y/o la Comisión de Honor y Justicia, o su similar municipal, proceda a realizar la investigación administrativa que corresponda, a fin de determinar la responsabilidad y sanciones específicas de **PEDRO MANUEL ECHEVERRÍA HERNÁNDEZ, JUAN ANTONIO RUÍZ**, **OVAD CÉSAR ECHEVERRÍA HERNÁNDEZ, GONZALO CASTRO CUEVAS, JULIO CÉSAR ESQUIVEL PADILLA, IVÁN SÁNCHEZ NÚÑEZ** y **HÉCTOR MANUEL MUÑOZ CALVILLO,** elementos de la Dirección de Seguridad Pública de Villanueva, Zacatecas, así como de la **LICENCIADA MARA PATRICIA SANDOVAL GÓMEZ**, Jueza Calificadora, adscrita a la referida Dirección, tomando en consideración los argumentos desarrollados en la presente recomendación.

D) <u>De las garantías de no repetición</u>.
1. Son aquellas que se adaptan con el fin de evitar que las víctimas vuelvan a ser objeto de violaciones a sus derechos y para contribuir a prevenir o evitar la repetición de actos de la misma naturaleza.

2. A fin de prevenir la violación de los derechos mencionados en párrafos precedentes, resulta indispensable que el H. Ayuntamiento de Villanueva, Zacatecas, implemente programas de capacitación dirigidos al personal de la Dirección de Seguridad Pública municipal, en materia del derecho a la integridad y seguridad personal; así como al derecho a la legalidad y seguridad jurídica, en relación a las detenciones no arbitrarias; y al uso correcto de la fuerza pública y, al derecho a la igualdad y no discriminación, específicamente

---

[65] Numeral 20. Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones
[66] Ibidem, numeral 21.
[67] Ibidem, numeral 22.

a los derechos que les asisten a las personas **LGBTI+**. Asimismo, se deberá realizar una revisión de los programas de capacitación con los que se cuente, a fin de mejorar el alcance de los mismos y, con ello, evitar violaciones a derechos humanos.

3. Contar con personal médico que lleve a cabo la certificación clínica de las personas que son detenidas y puestas a disposición en la Dirección de Seguridad Pública de Villanueva, Zacatecas. Además, se implementen protocolos de certificación médica de las personas detenidas, en base a estándares internacionales, en donde se establezca con certeza y precisión, las lesiones que presentan las personas que sean puestas a disposición de la Dirección de Seguridad Pública, en donde, además, se deje constancia fotográfica y/o de videograbación, respecto de las condiciones físicas en que ingresan las mismas.

IX. RECOMENDACIONES.

Por lo anterior, y con fundamento en los artículos 1° y 102 apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, numerales 2, 3, 4, 8, 17, 37, 51, 53, 54, 56, 57 y 58 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas se emiten las siguientes Recomendaciones:

PRIMERA. Dentro de un plazo máximo de un mes, contado a partir de la notificación de la presente Recomendación, se inscriba a los **CC. Q1** y **A1,** ambos de apellidos […], como víctimas directas de violaciones a sus derechos humanos, en el Registro Estatal de Víctimas, a fin de que, en un plazo máximo de un año, se garantice su acceso oportuno al Fondo de Atención, Asistencia y Reparación Integral, previsto en dicha Ley de Atención a Víctimas del Estado de Zacatecas, y se envíen a esta Comisión las constancias con que se acredite su cumplimiento.

SEGUNDA. Dentro del plazo máximo de un mes, contado a partir de la notificación de la presente recomendación, se valore y determine si los **CC. Q1 y A1,** ambos de apellidos […]**,** como víctimas directas de violaciones a sus derechos humanos, requieren de atención médica, psicológica y jurídica y, en su caso, se realicen las gestiones necesarias para que, si así lo deciden, inicien su tratamiento, hasta su total restablecimiento. Debiendo enviar a este Organismo las constancias con las que se acredite su cumplimiento.

TERCERA. Dentro del plazo máximo de un mes, contado a partir de la aceptación de la presente recomendación, se inicien por parte del H. Ayuntamiento de Villanueva, Zacatecas, a través del Órgano Interno de Control y/o la Comisión de Honor y Justicia, o su similar municipal, los procedimientos administrativos a la **LICENCIADA MARA PATRICIA SANDOVAL GÓMEZ**, Jueza Calificadora, así como a los **CC. PEDRO MANUEL ECHEVERRÍA HERNÁNDEZ, JUAN ANTONIO RUÍZ**, **OVAD CÉSAR ECHEVERRÍA HERNÁNDEZ, GONZALO CASTRO CUEVAS, JULIO CÉSAR ESQUIVEL PADILLA, IVÁN SÁNCHEZ NÚÑEZ** y **HÉCTOR MANUEL MUÑOZ CALVILLO,** elementos de la Dirección de Seguridad Pública de Villanueva, Zacatecas, remitiendo a este Organismo las evidencias correspondientes.

CUARTA. Dentro del plazo máximo de un mes, contado a partir de la aceptación de la presente recomendación, se implementen protocolos de certificación médica de las personas detenidas, en base a estándares internacionales, en donde se establezca con certeza y precisión, las lesiones que presentan, en donde, se deje constancia fotográfica y/o de videograbación, respecto de las mismas. Asimismo, garantizar que, en las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública de Villanueva, Zacatecas, cuente con personal médico disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con la finalidad de no vulnerar los derechos humanos de las personas detenidas.

QUINTA. Dentro de un plazo máximo de tres meses, contado a partir de la aceptación de esta Recomendación, se capacite a las y los elementos de la Dirección de Seguridad Pública municipal de Villanueva, Zacatecas, dando prioridad al personal que intervino en los hechos analizados en la presente Recomendación, en temas relacionados con derechos humanos en lo general, y en particular, sobre el derecho a la integridad y seguridad personal de las

personas que son aseguradas y/o detenidas; así como al derecho a la legalidad y seguridad jurídica, en relación a las detenciones no arbitrarias; y en el derecho a la igualdad y no discriminación de las personas pertenecientes a la comunidad **LGBTI+.**

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 53, párrafo segundo de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, se hace del conocimiento de la autoridad a la que va dirigida esta Recomendación, que dispone de un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente en que ésta se le notifique, para que manifieste si la acepta o no, en el entendido de que, de no aceptarla, su respuesta se hará del conocimiento de la opinión pública. En caso de que la acepte, se le notifica que dispone de un plazo de 15 días, contados a partir del vencimiento del término del que disponía para responder sobre la aceptación, a fin de enviar las pruebas de su cumplimiento.

Por último, hágasele saber al agraviado que, de conformidad con el artículo 61 de la Ley de este Organismo, dispone de 30 días naturales, computados a partir de la fecha de notificación del presente documento, para que en caso de que exista inconformidad con la misma, interponga el recurso de impugnación correspondiente ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Así lo determina y firma

_____

DRA. EN D. MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOS
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE ZACATECAS.

Expediente: CDHEZ/045/2020.

Personas quejosas: Q1 y Q2.

Personas agraviadas: Q1 y Q2.

Autoridades responsables:
I. Elementos de la Dirección de Seguridad Pública del municipio de Loreto, Zacatecas.
II. Juez Calificador de Loreto, Zacatecas.

Derechos humanos vulnerados:
I. Derecho a la legalidad y seguridad jurídica, en concatenación a no ser objeto de detenciones arbitrarias.
II. Derecho a la legalidad y seguridad jurídica, en relación a la falta de fundamentación y motivación de los actos de molestia.

Zacatecas, Zacatecas, a 01 de septiembre de 2021, una vez concluida la investigación de los hechos que motivaron el expediente CDHEZ/045/2020, realizada por la visitaduría regional de Loreto, Zacatecas, y analizado el proyecto presentado, la suscrita aprobó, de conformidad con los artículos 4, 8 fracción VIII, 17 fracción V, 37, 51, 53 y 56 de la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, en relación con lo dispuesto por los artículos 161 fracción X, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 y 175 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, la presente **Recomendación No. 46/2021**, la cual se dirige a la siguiente autoridad:

C. FRANCISCO FIGUEROA GÓMEZ, Presidente Municipal de Loreto, Zacatecas.

I. DE LA CONFIDENCIALIDAD.

1. En términos de lo establecido por los artículos 6º, apartado A, fracción II y 16 párrafo segundo, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 23 y 85 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, los datos personales de la quejosa y los agraviados, relacionados con esta Recomendación, permanecerán confidenciales, ya que éstos no son públicos.

2. Asimismo, en términos de lo dispuesto por los artículos 4°, párrafo sexto en relación con el apartado A, 6° fracción II, y 16 párrafo segundo, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 16 de la Convención de los Derechos del Niño, los nombres, apellidos y demás datos personales de niñas y niños vinculados con los hechos de la presente resolución, se mantienen bajo la misma estricta confidencialidad, en pleno respeto a su derecho a la intimidad y vida privada.

II. RELATORÍA DE LOS HECHOS Y OBJETO DE LA CONTROVERSIA.

1. El 27 de enero de 2020, **Q1**presentó formal queja, en contra de **ELEMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE LORETO**, por actos presuntamente violatorios a sus derechos humanos, de conformidad con los artículos 30, 31 y 32 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas.

Posteriormente, el 7 de febrero de 2020, la **C. Q2,** solicitó que se investigara su detención, misma que se llevó acabo junto con la del **C. Q1.**

Por razón de turno, en esa misma fecha, se remitió el escrito de queja a la Visitaduría Regional de Loreto, bajo el número de expediente citado al rubro, a efecto de formular el acuerdo de calificación de ésta, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 123 y 124 del Reglamento de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas.

El 30 de enero de 2020, se calificó la queja, como presunta violación al derecho a la legalidad y seguridad jurídica, en concatenación a no ser objeto de detenciones arbitrarias y al derecho a la legalidad y seguridad jurídica, en relación a la falta de fundamentación y motivación de los actos de molestia, conforme a lo establecido por los artículos 123 y 124 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas.

2. Los hechos puestos en conocimiento de esta Comisión y que constituyen la materia de la queja consistieron en lo siguiente:
El **C. Q1**afirmó que, el día 25 de diciembre de 2019, sus dos menores hijos se encontraban bajo su custodia, y uno de ellos presentó una crisis convulsiva, por lo que acudió al domicilio de su ex esposa, para pedirle que le diera el carnet del menor y así llevarlo a recibir atención médica. Sin embargo, ésta se negó a entregárselo, por lo que regresó a su domicilio. No obstante, mencionó que, momentos después, llegó su ex esposa acompañada de policías preventivos, quienes únicamente se limitaron a solicitarle entregara a los niños. Solicitud a la que se negó, por lo que éstos se retiraron del lugar. Señala que, momentos después, él llevó a los menores al domicilio de su ex esposa.

De igual manera refirió que, el día 25 de enero de 2020, acudió al domicilio de su ex esposa, en compañía de **Q2,** su actual pareja, para ver a sus hijos, pero éstos no se encontraban, que, en su camino de regreso, pasó por un salón de fiestas y se percató que ahí se encontraban sus dos hijos, por lo que solicitó permiso para entrar y saludarlos. Sin embargo, su ex esposa no le permitió hacerlo, y al salir del salón su ex esposa se fue tras de él y llamó a la policía, por lo que decidió retirarse. No obstante, a una cuadra y media del salón de fiestas, la policía le indicó que detuviera su vehículo y, enseguida, procedieron a su detención, explicándole que lo habían denunciado de que quería llevarse a sus hijos por la fuerza, menciona que, un policía se llevó su camioneta, junto con su actual pareja **Q2;** que estando ambos en la comandancia fueron internados en separos preventivos, donde permanecieron por espacio de una hora, pagando una multa de $800.00 (ochocientos pesos 00/100 M.N.) para obtener su libertad.

3. El 13 de febrero de 2020, el Profesor **JOSÉ LUIS FIGUEROA RANGEL**, Presidente Municipal de Loreto, Zacatecas, rindió el informe de autoridad correspondiente.

III. COMPETENCIA.

1. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas es competente, en los términos de los artículos 1º, 4º, 6º, 8º fracción VII, inciso A) y 31 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, en relación con los numerales 15, 22 y 23 de su Reglamento Interno, en razón de que la queja se promueve en contra de servidores públicos adscritos a la Presidencia Municipal de Loreto, Zacatecas, por hechos ocurridos en el año 2020.

2. De conformidad con los artículos 123 y 124 del Reglamento Interior de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, este Organismo advierte que de los hechos señalados se puede presumir la violación de los derechos humanos de los **CC. Q1** y **Q2**, así como la probable responsabilidad por parte de los servidores públicos señalados.
3. Esta Comisión presumió la violación de los siguientes derechos:

a) Derecho a la legalidad y seguridad jurídica, en concatenación a no ser objeto de detenciones arbitrarias.
b) Derecho a la legalidad y seguridad jurídica, en relación a la falta de fundamentación y motivación de los actos de molestia.

IV. PROCEDIMIENTO ANTE LA COMISIÓN.

Conla finalidad de documentar las presuntas violaciones a derechos humanos, así como para

determinar la existencia o no de responsabilidad por parte de los servidores públicos señalados, este Organismo realizó entrevistas a las personas relacionadas con los hechos; se recabaron comparecencias de servidores públicos adscritos a la Dirección de Seguridad pública del municipio de Loreto, Zacatecas y se solicitaron informes a las autoridades señaladas como responsables así como informes en vía de colaboración.

V. PRUEBAS.

Con base en lo estipulado en los artículos 48 y 49 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, en relación con los numerales 150, 151, 152, 153 y 154 del Reglamento Interior de este Organismo, durante el procedimiento realizado por esta Institución se recabaron los elementos probatorios documentales, remitidos tanto por la parte quejosa como por las autoridades señaladas como responsables; así como, las declaraciones necesarias para emitir la resolución correspondiente.

VI. SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS ANALIZADOS

En congruencia con lo expuesto a lo largo del apartado III, en lo que sigue se entrará al fondo de la cuestión, a fin de determinar si los indicios de violación advertidos en el caso constituyen una afectación injustificada al ámbito definitivo de los derechos fundamentales aludidos. Con ese fin, este apartado se dividirá en diversos parágrafos tendientes a explicitar la cadena argumental seguida por la Comisión.

A. El carácter de los derechos fundamentales y la obligación de los Estados

1. En términos del primer párrafo del artículo 1º constitucional, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección; por lo tanto, el ejercicio de aquellos no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la Constitución establece. Con base en esta previsión, puede concluirse que la Ley Fundamental reconoce una variada pléyade de facultades, prerrogativas, libertades y pretensiones de carácter civil, económico, social y cultural que, en su conjunto, pretenden asegurar los medios para que la persona pueda desarrollar una existencia autónoma y goce de la igual consideración y respeto. Para ello, la Constitución no se contenta solo con establecer sendas declaraciones dogmáticas, sino que también ha instrumentado un amplio conjunto de mecanismos procesales para asegurar el cumplimiento efectivo de los derechos así establecidos.[1]

2. En efecto, los derechos constitucionales no solamente resultan “reconocidos” desde la escala más alta de la pirámide de la juridicidad, sino que, en razón de su título universal de asignación y su indisponibilidad para los particulares y la autoridad, resultan dotados de la máxima garantía que el derecho positivo puede conferirles. Se trata de derechos atribuidos a todos los sujetos en cuanto dotados del estatus de personas, de ciudadanos o de sujetos con capacidad de obrar.[2] Por eso, a diferencia de los derechos subjetivos patrimoniales donde su titular goza de ellos con exclusión de los demás, los derechos constitucionales son derechos que todos detentan en pie de igualdad.

3. Pero las diferencias no terminan aquí. Si bien hasta ahora se ha preferido la expresión “derechos fundamentales” en lugar de “derechos humanos”, precisamente para denotar el carácter fuertemente positivizado de los primeros, ello no quiere decir que la base de sustentación de los derechos se encuentre solo en el poder de la carta que los contiene. Por el contrario, los derechos representan la plasmación de un denso contenido axiológico que ha dejado de gravitar sobre las constituciones para migrar al interior de ellas. De algún modo, “el tiempo de los derechos” –para usar una acertada expresión– operó una vuelta de tuerca

---

1 Cfr. Rodríguez y Rodríguez, Jesús, “Derechos humanos”, en Carbonell, Miguel (coord.), *Diccionario de derecho constitucional,* 3ª ed., México, Porrúa-IIJ/UNAM, 2009, pp. 481-484.

2 Para una amplia discusión sobre el concepto de los derechos fundamentales, véase: Ferrajoli, Luigi, *et. al*. (Antonio de Cabo y Gerardo Pisarello, eds.), *Los fundamentos de los derechos fundamentales*, 4ª ed., Madrid, Trotta, 2009.

doble.[3] En primer lugar, en un sentido superador de la clásica dicotomía entre el positivismo jurídico y el derecho natural, la edad de las declaraciones marcó el inicio de un proceso de constitucionalización al final del cual no quedan en el ordenamiento espacios libres a la influencia de los derechos fundamentales. Bajo esta premisa, el Estado de Derecho puede calificarse de "constitucional" y expandir sus confines para disciplinar, además de las relaciones jurídicas entre los particulares y la autoridad, ciertos aspectos de los nexos creados por los particulares entre sí y, desde luego, para disciplinar la actividad del Estado en el plano de la responsabilidad internacional a causa de violaciones a tales derechos. El paradigma constitucional entonces se ha abierto en una tendencia integradora tanto a la escala antes cerrada del derecho privado como al nivel multinacional de la protección regional de los derechos humanos.

4. Además, la previsión de una carta constitucional plenamente vinculante, es decir, dotada de la eficacia de una norma jurídica de especial cualidad, comporta un giro desde el ámbito de los deberes hasta llegar al plano de los derechos. En el comienzo de su historia, los derechos estaban vinculados a una concepción individualista de la sociedad donde la primacía del deber se hallaba puesta al servicio de determinadas expectativas en beneficio del sujeto. Empero, esas expectativas eran mínimas y representaban simples abstenciones para el poder. Es por ello que los códigos regulatorios de la conducta en el ámbito de la moral y el derecho fueron creados para salvaguardar al grupo social en detrimento de sus miembros particulares. Había, por tanto, una primacía de los deberes sobre los derechos. Sin embargo, una vez que las declaraciones constitucionales se tornaron plenamente vinculantes, la relación de precedencia deber-derecho se invirtió.[4]

5. Esto no quiere decir que a tenor de las cartas de derechos se pueda desplegar un ejercicio libérrimo de la voluntad del sujeto, pues de esta manera los derechos devendrían absolutos y no sería posible armonizar sus exigencias de manera complementaria (por ejemplo, en el ámbito individual y social). En cambio, lo que quiere dar a entenderse es que son los derechos quienes legitiman la acción del poder público, de manera que toda irrupción no autorizada dentro de las posiciones jurídicas garantizadas por ellos se convierte en un ilícito de carácter constitucional que debe ser reparado por los medios posibles a fin de que la Constitución no resulte vulnerada.

6. Los derechos son conquistas históricas impuestas al poder público. Por eso, la autoridad solo posee capacidad para reconocerlos y acotarlos (ya que ningún derecho es absoluto), pero siempre que en dicha actividad se realice dentro de los márgenes no necesarios ni prohibidos por la Constitución. En virtud de esa vinculación de la autoridad a los contenidos de la Ley Fundamental se establece un modelo de Constitución normativa a partir del cual, el legislador y en general el resto de los poderes públicos vienen obligados a respetar el contenido de todos los preceptos constitucionales ya sea al definir el sentido y alcance de las normas subordinadas a aquellos, o bien, al momento de emitir cualquier acto que pueda traducirse en un principio de afectación para las expectativas garantizadas.[5]

7. A expensas del proceso de constitucionalización,[6] los derechos fundamentales cumplen una función dual dentro del ordenamiento. Conforme a su clásica tarea subjetiva, pueden contemplarse como elementos protectores de ciertos bienes básicos para la existencia digna de las personas. En este sentido, los derechos amparan posiciones de seguridad personal, según las cuales, por ejemplo, las personas saben que no deberán ser molestadas en sus papeles posesiones o derechos sin un mandato escrito de la autoridad competente, o que no podrán ser privados de la libertad sin una orden judicial que así lo determine. Sin embargo, al lado de esa faceta aseguradora de carácter subjetivo, los derechos se han convertido en elementos legitimadores del sistema jurídico y democrático en sentido amplio (dimensión objetiva).[7] Para decirlo con las palabras de un reciente criterio jurisprudencial:

> Los derechos fundamentales gozan de una doble cualidad dentro del ordenamiento jurídico

---

3 Véase: Bobbio, Norberto, *El tiempo de los derechos*, trad. de Rafael de Asis Roig, Madrid, Sistema, 1991.

4 Cfr. Bobbio, Norberto, "La primacía de los derechos sobre los deberes", trad. de Magdalena Lorenzo, *Teoría general de la política,* 3ª ed., Madrid, Trota, 2009, pp. 513-515.

5 Cfr. Prieto Sanchís, Luis, "Contenido esencial (de los derechos fundamentales)", en Carbonell, Miguel (coord.), *op. cit.*, pp. 235-239

6 En torno a las características del proceso de constitucionalización y sus implicaciones, véase: Guastini, Ricardo, *Estudios de teoría constitucional,* 2ª ed., México, Fontamara, 2007, pp. 147-177.

7 Sobre estas funciones, puede verse: Rodríguez Durón, Everardo, *El control constitucional ante el desafío democrático. Un acercamiento al problema contramayoritario en el derecho constitucional mexicano,* tesis profesional para obtener el grado de Maestro en Justicia Constitucional, Universidad de Guanajuato, 2017, p. 171.

> mexicano, ya que comparten una función subjetiva y una objetiva. Por una parte, la función subjetiva implica la conformación de los derechos fundamentales como derechos públicos subjetivos, constituyéndose como inmunidades oponibles en relaciones de desigualdad formal, esto es, en relaciones con el Estado. Por otro lado, en virtud de su configuración normativa más abstracta y general, los derechos fundamentales tienen una función objetiva, en virtud de la cual unifican, identifican e integran, en un sistema jurídico determinado, a las restantes normas que cumplen funciones más específicas. Debido a la concepción de los derechos fundamentales como normas objetivas, los mismos permean en el resto de componentes del sistema jurídico, orientando e inspirando normas e instituciones pertenecientes al mismo.[8]

8. Ahora bien, el papel plenamente vinculante de los derechos fundamentales no ha sido reconocido solo en la sede del derecho interno, sino que se encuentra soportado en diversos instrumentos internacionales vinculantes para el Estado Mexicano. En efecto, el deber de atenerse al bloque de constitucionalidad como parámetro de análisis de la conducta desplegada por la autoridad, es un imperativo que se sigue del deber de los Estados para respetar y garantizar los derechos humanos. A este propósito, conviene recordar que el artículo 1º de la Convención Americana, señala que:

> **Artículo 1º.** 1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 2. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano.

9. Y, en el mismo sentido, el artículo 2º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos estipula:

> **Artículo 2º.** 1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción, los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 2. Cada Estado Parte se compromete a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones del presente Pacto, las medidas oportunas para dictar las disposiciones legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos en el presente Pacto y que no estuviesen ya garantizados por disposiciones legislativas o de otro carácter. 3. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a garantizar que: a) Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente Pacto hayan sido violados podrá interponer un recurso efectivo, aun cuando tal violación hubiera sido cometida por personas que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales; b) La autoridad competente, judicial, administrativa o legislativa, o cualquiera otra autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado, decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso, y desarrollará las posibilidades de recurso judicial; c) Las autoridades competentes cumplirán toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.

10. Consecuentemente, la Comisión estima que el análisis de las presuntas violaciones cometidas en la especie solamente puede realizarse desde una perspectiva metodológica fundada el deber de todas las autoridades del Estado Mexicano para promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos, tal como lo determina el artículo 1º de la Constitución.

11. Desde luego, en las afirmaciones anteriores no pasa desapercibido que, en términos de lo dispuesto por los artículos 37, 51 y 53 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, este organismo no puede sustituirse a las funciones que corresponden a otras

---

8 Véase *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación,* 10ª época, libro 34, tomo I, p. 333. Desde luego, no pasa desapercibido para esta Comisión que, en términos de lo dispuesto 217 de la Ley de Amparo, este criterio solamente es vinculante para las autoridades de naturaleza jurisdiccional, sin embargo, la Comisión considera que las razones que informan el criterio condensan su propio parecer sobre la cuestión, de manera que se puede hacer un uso argumental de esta clase de criterios. Con esa salvedad, donde quiera que en esta recomendación se haga uso de precedentes derivados de los criterios jurisprudenciales sentados por los órganos del Poder Judicial de la Federación, debe entenderse que la Comisión considera favorablemente el sentido interpretativo que de ellos deriva.

autoridades o niveles de gobierno para dejar insubsistentes actuaciones o determinaciones que son competencia exclusiva de aquellos. La Comisión tampoco puede enderezar un estudio tomando solo como referencia los criterios sustantivos o formales en que las autoridades soportaron sus decisiones, pues ello comportaría perder el parámetro de análisis constitucional que vincula directamente a este organismo. Por eso, en exclusiva lo que corresponde a la Comisión es determinar si –a la luz de la Constitución y del derecho internacional de los derechos humanos aceptado en los compromisos suscritos por el Estado Mexicano– existió (o no) una violación a los derechos de los quejosos.

12. Establecidas las consideraciones anteriores, entremos en materia. Como se sabe, los derechos fundamentales constituyen un haz de posiciones y normas vinculadas a una disposición de derecho fundamental. Por ello, cabe concluir que las relaciones jurídicas denotadas por esta clase de derechos se dan entre dos sujetos y un objeto. Entre los sujetos existe una relación generalmente de supra a subordinación, a tenor de la cual, el primero de ellos –el sujeto activo– está en condiciones de exigir de la autoridad –el sujeto pasivo– ciertas conductas activas u omisivas que representan el contenido del derecho.

13. Como se aprecia en la identificación de derechos violados del apartado III, es preciso desplegar un ejercicio hermenéutico de concreción de los derechos fundamentales implicados en el asunto, ya que –como se verá en los apartados ulteriores donde se les dote de contenido– cada disposición de derecho fundamental susceptible de desdoblarse en una cantidad variable de normas de derecho fundamental adscritas, ya que no existe una correspondencia univoca entre un precepto (disposición) consagrado, por ejemplo, en la Constitución o en los tratados internacionales aplicables, y las “normas de derecho fundamental” que efectivamente se derivan de la primera.[9] Por eso, bajo el derecho a la seguridad jurídica o a la libertad, en tanto principios general del ordenamiento, se brinda cobertura a otras tantas manifestaciones concretas –verbigracia, a la garantía de legalidad y al derecho de libertad personal– que pueden ser desconocidos por la autoridad en formas innúmeras, entre las cuales –nuevamente para lo que aquí importa– destacan las detenciones y retenciones arbitrarias. Este desglose es preciso no solo para conocer de manera exacta qué expectativa fundamental fue conculcada, sino también a qué elementos de la autoridad les resulta imputable y bajo qué manera específica de comisión se concretaron las afectaciones materia de análisis.

14. Sobre estas consideraciones teóricas y metodológicas, se considera pertinente dotar de contenido a los derechos fundamentales cuya violación preliminar se ha identificado en la especie. Para estos efectos, la Comisión desplegará una cadena argumental que irá de lo general a lo particular, y que en un orden descendente permitirá sentar las premisas normativas y fácticas indispensables para apreciar la regularidad (o irregularidad) de los actos atribuidos a las autoridades responsables. Por lo tanto, la operación para definir los contenidos vinculantes de los derechos fundamentales implicados describirá un proceso de concreción que transita del género iusfundamental hasta llegar a la manifestación concreta de la vulneración. Por eso, en los dos apartados siguientes se comenzará por dotar de contenido al derecho general de libertad y al derecho a la seguridad jurídica y, para luego hacer un pronunciamiento en relación con el derecho a la libertad personal y la garantía de legalidad que se siguen de los primeros.

B. De la seguridad jurídica a su manifestación concreta en el principio de legalidad

15. Ahora avancemos sobre el segundo par iusfundamental propuesto; es decir, la relación entre el derecho a la seguridad jurídica hasta llegar al principio (o garantía, para usar una expresión común en el léxico de los juristas) de legalidad.

16. Partamos de una proposición tópica, es decir, de un argumento compartido por el común de las personas y que, por ello mismo, podría darse por demostrado sin demasiado esfuerzo, de manera que la carga de la prueba no corresponde al que afirma sus efectos, sino al que quiera desafiar las consecuencias que se siguen de él. Así, se parte de una premisa segura al afirmar que en las relaciones entre los gobernados y la autoridad suceden múltiples actos que

---

9 Por ello las teorías más socorridas para explicar la estructura de los derechos humanos parten de distinguir entre las normas de derecho fundamental y las disposiciones de derecho fundamental. Así, mientras que las disposiciones son los enunciados directamente formulados por los artículos de las declaraciones fundamentales, las normas son “el significado normativo” directamente expresado por las disposiciones. Cfr. Alexy, Robert, *Teoría de los derechos fundamentales,* trad. de Carlos Bernal Pulido, 2ª ed. Madrid, CEPC, 2012, pp. 31-62.

tienen consecuencias sobre la esfera jurídica de las personas. Por lo tanto, dentro de un Estado de Derecho, cualquier afectación de esta naturaleza tendrá que obedecer a determinados principios y satisfacer otros tantos requisitos previos. En suma, cualquier manifestación del poder público deberá estar sometida a un conjunto de modalidades jurídicas, sin cuya observancia no sería válida desde el punto de vista de la ley y la Constitución.[10]

17. Con razón, puede decirse que los derechos de seguridad jurídica son todo un género que aglutina diferentes especies concretas de requisitos, condiciones y elementos. Se trata, por tanto, de un conjunto general de condiciones a que debe sujetarse una cierta actuación estatal para generar una afectación valida de diferente índole en la esfera del gobernado, integrada por el summum [digamos: la totalidad] de sus derechos.[11] En cuanto haz de posiciones iusfundamentales, la seguridad jurídica se manifiesta como la sustancia de diversos derechos públicos subjetivos oponibles y exigibles por los gobernados a los agentes de la autoridad, quienes tienen el deber de acatarlos.[12]

18. La seguridad jurídica es uno de los principios esenciales sobre los que se erige la estructura normativa que sustenta el Estado de Derecho. En su sentido prístino, el principio afirma la sujeción de los poderes públicos al ordenamiento. Por eso, sus raíces se encuentran en el momento fundacional del constitucionalismo. Como se sabe, para esta doctrina –en tanto teoría política y jurídica– el sistema constitucional tiene su base de justificación y primordial razón de ser en cuanto logra cristalizar el control del poder por medio de los mandatos del derecho. En ese contexto, la seguridad jurídica se expresa por medio de previsiones formales destinadas a acotar la acción del Estado –entre otras cosas a través de la división funcional de poderes, la reserva de ley y la garantía de legalidad– a fin de preservar la libertad de las personas.[13]

19. En esa virtud, el Estado únicamente puede actuar en ejercicio de las facultades que el propio ordenamiento le confiere, mientras que la extensión del hacer lícito de los particulares se extiende a todos los ámbitos de la conducta que no están expresamente proscritos por las normas jurídicas. Así, en su dimensión de justicia formal, la función de la seguridad jurídica limita el voluntarismo del poder y preserva la libertad de los ciudadanos. En consecuencia, el principio enuncia un requisito esencial para mantener la cohesión social y para la adhesión y el acuerdo de la ciudadanía con el sistema político y jurídico en el que vive.[14] Con razón se ha dicho que el Estado de derecho solo es un proyecto viable cuando la organización política es capaz de mantener el monopolio del ejercicio de la coacción y ejercer esa misma coacción institucionalizada con arreglo a las exigencias del derecho.

20. Acorde con su naturaleza poliédrica del derecho bajo análisis, derivan diversas conductas que el Estado y sus órganos tienen el deber de observar. Verbigracia, a diferencia de los derechos de libertad, donde el Estado tiene el deber de tolerar o abstenerse de intervenir en las manifestaciones de conducta lícitas de las personas, los derechos de seguridad jurídica obligaciones de carácter activo, en cuanto ese es el sentido principal de los actos que deben desplegarse para el cumplimiento de los requisitos, condiciones o elementos conformadores de cada derecho fundamental en particular. Desde luego, esto no quiere decir que las autoridades también deban abstenerse de vulnerar los derechos –por ejemplo, cuando no están dotadas de competencia o no satisfacen las exigencias impuestas por el orden constitucional para cada supuesto–, sino tan solo se limita a indicar que la faz activa de los derechos de seguridad jurídica ocupa un lugar prominente.[15]

21. En nuestro sistema constitucional, los principios fundamentales de la seguridad jurídica están consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República.[16] Según la primera de las disposiciones fundamentales:

> **Artículo 14.** A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.

---

10 Cfr. Burgoa, Ignacio, “Garantías de seguridad jurídica”, *op. cit.,* p. 199.

11 *Ibid*.

12 *Ibid*.

13 Cfr. Carbonell, Miguel, *Los derechos fundamentales en México,* 4ª ed., México, Porrúa-IIJ/UNAM-CNDH, 2011, p. 586.

14 Vease: Peces Barba Martínez, Gregorio, “La Constitución y la seguridad jurídica”, *Claves de Razón Práctica* No. 138, Madrid, diciembre de 2003, p. 8.

15 Así, Burgoa, Ignacio, *op. cit.,* p. 200.

16 Cfr. Arteaga Nava, Elisur, *Garantías individuales,* México, Oxford University Press, 2009, p. 113.

> Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho.
> En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata
> En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho.

22. Por su parte, para lo que ahora interesa, el artículo 16 de la Constitución señala en su primer párrafo:

> **Artículo 16.** Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo.

23. Las disposiciones de los artículos 14 y 16 contienen una gran cantidad de normas iusfundamentales cuya importancia es destacada, en cuanto se refieren a instituciones que son determinantes para hacer operantes los demás derechos y libertades que la Constitución prevé, y efectivas las barreras y limitantes a la acción u omisión de las autoridades.[17]

24. Conforme lo expuesto, la seguridad jurídica se traduce en un parámetro de calificación jurídica de la regularidad constitucional. Cuando los requisitos que preceden o son concomitantes a la expedición del acto jurídico del poder público, la ley y la Constitución reputan tales actuaciones de regulares y como una manifestación autentica del ejercicio de la autoridad. En caso contrario, existe un desdoro del orden jurídico que no puede subsistir ni producir efectos, y que constituye una fuente de responsabilidad para sus autores. Esta idea bien podría expresarse al través de una regla dicotómica en cuyos extremos se encuentra la afirmación y la negación del principio que nos ocupa:

> Es válida la actuación de los titulares de la autoridad cuando se conducen en observancia de los principios que consagran y regulan el valor de la seguridad jurídica. Para un servidor público, la titularidad de la autoridad que ostenta será regular en la medida en que su acceso se haya dado en los términos de ley; sus actos y hechos serán válidos en la medida en que estén de acuerdo con ella; incurrirán o no en responsabilidad, en el grado en que su actuación se haya ajustado a lo que ella dispone.[18]

25. En correlación con el estudio que se ha realizado hasta ahora, cabe destacar que también desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos se puede deducir la obligación del Estado Mexicano a cumplir con el derecho a la seguridad jurídica y con el principio de legalidad, tal como se establece por los artículos 8º y 10 Declaración Universal de Derechos Humanos;[19] en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos;[20] el artículo XVIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del

---

17 Cfr. Arteaga Nava, Elisur, *op. cit.,* pp. 113-114.

18 *Ibidem*, p. 114.

19 El artículo 8º de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que "Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación". Mientras que su numeral 10, previene que "Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal."

20 El artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, determina "1. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil. La prensa y el público podrán ser excluidos de la totalidad o parte de los juicios por consideraciones de moral, orden público o seguridad nacional en una sociedad democrática, o cuando lo exija el interés de la vida privada de las partes o, en la medida estrictamente necesaria en opinión del tribunal, cuando por circunstancias especiales del asunto la publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la justicia; pero toda sentencia en materia penal o contenciosa será pública, excepto en los casos en que el interés de menores de edad exija lo contrario, o en las acusaciones referentes a pleitos matrimoniales o a la tutela de menores. 2. Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley. 3. Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: a) A ser informada sin demora, en un idioma que comprenda y en forma detallada, de la naturaleza y causas de la acusación formulada contra ella; b) A disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa y a comunicarse con un defensor de su elección; c) A ser juzgado sin dilaciones indebidas; d) A hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser asistida por un defensor de su elección; a ser informada, si no tuviera defensor, del derecho que le asiste a tenerlo, y, siempre que el interés de la justicia lo exija, a que se le nombre defensor de oficio, gratuitamente, si careciere de medios suficientes para pagarlo; e) A interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia de los testigos de descargo y que éstos sean interrogados en las mismas condiciones que los testigos de cargo; f) A ser asistida gratuitamente por un intérprete, si no comprende o no habla el idioma empleado en el tribunal; g) A no ser obligada a declarar contra sí misma ni a confesarse culpable. 4. En el procedimiento aplicable

Hombre[21] y en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.[22]

26. Por lo tanto, estamos en condiciones de dotar de contenido concreto al principio de seguridad jurídica. Si bien se trata de una norma genérica que da lugar a múltiples variantes de protección, sus manifestaciones pueden ser reconducidas a dos dimensiones principales. La primera de ellas, está relacionada con la previsibilidad del comportamiento personal; es decir, en un "saber a qué atenerse" en cuanto a que los hechos que sirven de condiciones para la activación de consecuencias jurídicas –favorables o desfavorables para el sujeto– deberán estar previstos en normas existentes con anterioridad al hecho y de acuerdo con las exigencias del debido proceso. En cambio, la segunda derivación del principio, tiene que ver con la corrección funcional en la actuación de los órganos del poder público.[23] Se trata, por tanto, de que la autoridad únicamente esté en aptitud legítima para desplegar sus potestades de imperio cuando ellas se atengan a normas promulgadas, comprensibles, completas, estrictas, escritas, previas y estables; de modo que la arbitrariedad de los operadores jurídicos –que no la discreción natural para la aplicación del derecho– no tengan espacio dentro de la experiencia constitucional.[24]

27. Si la seguridad jurídica equivale a la previsión constitucional de las "reglas establecidas" para la convivencia entre las autoridades y los gobernados, entonces la mayoría de las posiciones iusfundamentales garantizadas por este principio tienen naturaleza adjetiva o procedimental.[25] Semejante carácter se aprecia, por ejemplo, en forma destacada en la garantía del debido proceso, la exacta aplicación de la ley penal, la proscripción de aplicar retroactivamente las leyes criminales o las reglas para la aplicación de las leyes en los negocios civiles que derivan del artículo 14 constitucional. Lo mismo ocurre con la garantía de legalidad del primer párrafo del artículo 16 de la Constitución.

28. El encabezado del artículo 16 constitucional consagra la garantía de legalidad en sentido amplio, cuando establece que "nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento." Las breves líneas de esta disposición equivalen a una regla general de clausura del ordenamiento, pues como lo explica la jurisprudencia, su sentido importa la proposición de que las autoridades solamente pueden hacer lo que la ley les permite",[26] de manera que lo que no tienen concedido, lo tienen prohibido.

29. En caso de duda interpretativa, debe concluirse que tienen negada la facultad o atribución, cuando se les otorga, se les otorga lo máximo, es decir, sin que exista la posibilidad de que sea posible ensanchar la competencia a través de ningún expediente o recurso, como podría ser la analogía o la mayoría de razón. Por lo demás, como ya se destacó con antelación, los

---

a los menores de edad a efectos penales se tendrá en cuenta esta circunstancia y la importancia de estimular su readaptación social. 5. Toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley. 6. Cuando una sentencia condenatoria firme haya sido ulteriormente revocada, o el condenado haya sido indultado por haberse producido o descubierto un hecho plenamente probatorio de la comisión de un error judicial, la persona que haya sufrido una pena como resultado de tal sentencia deberá ser indemnizada, conforme a la ley, a menos que se demuestre que le es imputable en todo o en parte el no haberse revelado oportunamente el hecho desconocido. 7. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual haya sido ya condenado o absuelto por una sentencia firme de acuerdo con la ley y el procedimiento penal de cada país.

21 Por su parte el artículo XVIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre previne que "Toda persona puede ocurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. Asimismo, debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente".

22 Los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos preceptúan, el primero, que "Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente independiente e imparcial establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. 2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: a) derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal; b) comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada; c) concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa; d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección o de comunicarse libre y privadamente con su defensor; e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley; f) derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos; g) derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable, y h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior. 3. La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza. 4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos. 5. El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la justicia." En tanto que el segundo numeral establece: "Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aún cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 2. Los Estados partes se comprometen: a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso".

23 En este sentido, Pérez-Luño, Antonio Enrique, *La seguridad jurídica,* Barcelona, Ariel, 1991, p. 23.

24 Véase: Carbonell, Miguel, *op. cit.*, pp. 587-589.

25 *Ibidem*, p. 691.

26 Cfr. *Apéndice al Semanario Judicial de la Federación* 1871-1988, segunda parte, Salas y tesis comunes, p. 512.

particulares pueden hacer todo aquello que no tienen prohibido. Tratándose de derechos y libertades, cuando la Constitución prohíbe o limita, lo hace hasta lo máximo, en el sentido de que no es dable a las autoridades constituidas aumentar el número o entidad de las limitaciones; pero –en contrapartida– cuando la Ley Fundamental concede, concede lo mínimo, en cuanto las leyes ordinarias y las autoridades administrativas –otra vez según su competencia– pueden incrementar esas libertades y derechos.[27]

30. A tenor del principio de legalidad "toda acción de cualquier órgano investido de poder estatal debe estar justificada una ley previa, toda vez que en el Estado de Derecho ya no se admiten poderes personales como tales, por la razón bien simple de que no hay ninguna persona cobre la comunidad y que ostente como atributo divino la facultad de emanar normas vinculantes para dicha comunidad.[28] Desde luego, la actividad estatal podría arreglarse al principio de legalidad conforme a dos intensidades variables. En sentido amplio, el Estado de Derecho puede resultar equivalente a un régimen de "mera legalidad" con tal de que la autoridad se ejerza conforme a determinadas reglas preexistentes, sin importar la sustancia o calidad de sus contenidos. Sin embargo, en un estadio superior, el Estado de Derecho comporta un régimen de "estricta legalidad"; es decir, aquel sistema donde rige una norma metalegal que somete la validez de las leyes que autorizan el ejercicio de la violencia pública a una serie de requisitos que se corresponden con otras tantas garantías sustantivas y procesales establecidas a favor de la persona.[29] Cuando se ha entronizado un sistema de estricta legalidad, cobra sentido la expresión según la cual no todo Estado es un Estado de Derecho, pues si la Constitución se concibe como una auténtica norma jurídica directamente aplicable, entonces la autoridad ciertamente queda vinculada a la ley aunque dicho nexo sea de una entidad diferente, pues la sujeción será solo en cuanto la ley sea válida de acuerdo con la Constitución.

31. Como se adelantó, las principales manifestaciones del género iusfundamental representado por la seguridad jurídica, se encuentran en los artículos 14 y 16 constitucionales. El primero, otorga sendas protecciones en contra de actos privativos que afecten a la persona, sus bienes, propiedades o derechos. Sin embargo, en el caso de la garantía de legalidad este ámbito de protección se ensancha todavía más, en cuanto que la materia de tutela de esa disposición son los actos de molestia.[30] Comparativamente el segundo de los numerales es más amplio, porque "todo acto de privación es además un acto de molestia", aun cuando no sucede lo mismo en el sentido inverso, ya que no todo acto de molestia tiene un efecto privativo de algún bien integrante de la esfera jurídica del sujeto. Esto significa que, en el caso de los actos de privación, las autoridades deben satisfacer conjuntamente las exigencias definidas por las garantías tanto del artículo 14 como de la garantía genérica de legalidad.[31]

32. Para estos efectos, por acto de molestia debe entenderse toda acción u omisión provisional o definitiva proveniente de la autoridad que causa un daño o un perjuicio a la persona o a los demás bienes constitucionalmente relevantes para el precepto, si es que el acto no reúne los requisitos que la ley y la Constitución prevén para ser emitidos: esto es, que se haga por escrito, que provenga de una autoridad competente y donde se funde y motive la causa legal del procedimiento.

33. Si bien en esta parte la referencia a los requisitos del acto de molestia constituye una

---

27 Así, Arteaga Nava, Elisur, *op. cit.*, p. 169.

28 Cfr. Carbonell, Miguel, *op. cit.*, p. 692.

29 Véase: Ferrajoli, Luigi, "La Legalidad violenta", trad. de Benjamín Rivaya García, *Derecho penal mínimo y otros ensayos,* Aguascalientes, Comisión Estatal de Derechos Humanos, 2008, pp. 31-54

30 La distinción entre los actos privativos y los actos de molestia ha sido objeto de una apreciable teorización en sede de la jurisprudencia. A este respecto se estima que el artículo 14 constitucional establece, en su segundo párrafo, que nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; en tanto, el artículo 16 de ese mismo Ordenamiento Supremo determina, en su primer párrafo, que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Por consiguiente, la Constitución Federal distingue y regula de manera diferente los actos privativos respecto de los actos de molestia, pues a los primeros, que son aquellos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, los autoriza solamente a través del cumplimiento de determinados requisitos precisados en el artículo 14, como son, la existencia de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido, que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y en el que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado. En cambio, a los actos de molestia que, pese a constituir afectación a la esfera jurídica del gobernado, no producen los mismos efectos que los actos privativos, pues sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, los autoriza, según lo dispuesto por el artículo 16, siempre y cuando preceda mandamiento escrito girado por una autoridad con competencia legal para ello, en donde ésta funde y motive la causa legal del procedimiento. Ahora bien, para dilucidar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un acto de autoridad impugnado como privativo, es necesario precisar si verdaderamente lo es y, por ende, requiere del cumplimiento de las formalidades establecidas por el primero de aquellos numerales, o si es un acto de molestia y por ello es suficiente el cumplimiento de los requisitos que el segundo de ellos exige. Para efectuar esa distinción debe advertirse la finalidad que con el acto se persigue, esto es, si la privación de un bien material o inmaterial es la finalidad connatural perseguida por el acto de autoridad, o bien, si por su propia índole tiende sólo a una restricción provisional. Cfr. *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, 9ª época, tomo IV, julio de 1996, p. 5.

31 *Ibidem*, pp. 691-692.

cuestión de explorado derecho que podría obviarse en beneficio de la brevedad, se estima pertinente referir sucintamente algunas nociones sobre ellos. Según los criterios emitidos por los tribunales de la Federación, de lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución Federal se desprende que la emisión de todo acto de molestia precisa de la concurrencia indispensable de tres requisitos mínimos, a saber: 1) que se exprese por escrito y contenga la firma original o autógrafa del respectivo funcionario; 2) que provenga de autoridad competente; y, 3) que en los documentos escritos en los que se exprese, se funde y motive la causa legal del procedimiento.

34. Cabe señalar que la primera de estas exigencias tiene como propósito evidente que pueda haber certeza sobre la existencia del acto de molestia y para que el afectado pueda conocer con precisión de cuál autoridad proviene, así como su contenido y sus consecuencias. Asimismo, que el acto de autoridad provenga de una autoridad competente significa que la emisora esté habilitada constitucional o legalmente y tenga dentro de sus atribuciones la facultad de emitirlo. Y la exigencia de fundamentación es entendida como el deber que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer el acto de autoridad, presupuesto que tiene su origen en el principio de legalidad que en su aspecto imperativo consiste en que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite; mientras que la exigencia de motivación se traduce en la expresión de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma.

35. Por lo tanto, los presupuestos de la fundamentación y de la motivación deben coexistir y se suponen mutuamente, pues no es posible citar disposiciones legales sin relacionarlas con los hechos de que se trate, ni exponer razones sobre hechos que carezcan de relevancia para dichas disposiciones. Esta correlación entre los fundamentos jurídicos y los motivos de hecho supone necesariamente un razonamiento de la autoridad para demostrar la aplicabilidad de los preceptos legales invocados a los hechos de que se trate, lo que en realidad implica la fundamentación y motivación de la causa legal del procedimiento.[32]

36. Así las cosas, los requisitos de mandamiento escrito, autoridad competente y fundamentación y motivación, son garantías instrumentales que, a su vez, revelan la adopción en el régimen jurídico nacional del principio de legalidad, como una garantía del derecho humano a la seguridad jurídica, acorde al cual las autoridades sólo pueden hacer aquello para lo que expresamente les facultan las leyes, en el entendido de que éstas, a su vez, constituyen la manifestación de la voluntad general. Bajo esa premisa, el principio mencionado tiene una doble funcionalidad, particularmente tratándose del acto administrativo, pues, por un lado, impone un régimen de facultades expresas en el que todo acto de autoridad que no represente el ejercicio de una facultad expresamente conferida en la ley a quien lo emite, se considerará arbitrario y, por ello, contrario al derecho a la seguridad jurídica, lo que legitima a las personas para cuestionar la validez de un acto desajustado a las leyes, pero, por otro, bajo la adopción del mismo principio como base de todo el ordenamiento, se genera la presunción de que toda actuación de la autoridad deriva del ejercicio de una facultad que la ley le confiere, en tanto no se demuestre lo contrario, presunción de legalidad ampliamente reconocida tanto en la doctrina como en la legislación nacional.

37. Así, el principio de legalidad, apreciado en su mayor amplitud, da cabida al diverso de interdicción de la arbitrariedad, pero también conlleva que éste opere a través de un control jurisdiccional, lo que da como resultado que no basta que el gobernado considere que determinado acto carece de fundamentación y motivación para que lo estime no obligatorio ni vinculante o lo señale como fuente de un derecho incontrovertible a una sentencia que lo anule, sino que, en todo caso, está a su cargo recurrir a los órganos de control a hacer valer la asumida ausencia o insuficiencia de fundamento legal y motivación dentro de dicho procedimiento y, a su vez, corresponderá a la autoridad demostrar que el acto cuestionado encuentra sustento en una facultad prevista por la norma, so pena de que sea declarado contrario al derecho a la seguridad jurídica, lo que revela que los procedimientos de control jurisdiccional, constituyen la última garantía de verificación del respeto al derecho a la

---

32 Cfr. *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, 9ª época, tomo XVII, abril de 2003, p. 1050.

seguridad jurídica, cuyas reglas deben ser conducentes y congruentes con ese propósito.[33]

38. En suma, la garantía de legalidad del artículo 16 in capite es uno de los preceptos que imparten mayor protección a las personas. Dicha garantía pone a salvo a los gobernados de todo acto, incluso de mera afectación, a su esfera jurídica, no solo cuando este sea arbitrario, es decir, cuando no está basado en norma jurídica alguna, sino también cuando la actuación de la autoridad es de algún modo irregular, sin importar la clase de precepto en la que se funde. En este sentido, el precepto bajo análisis se erige en un derecho fundamental de extraordinario valor, donde se aprecia claramente el doble carácter de los derechos fundamentales. En virtud de la garantía de legalidad las personas pueden tener la certeza de que ninguna molestia injustificada les será irrogada en su esfera de potestades reconocidas por el bloque de constitucionalidad. Pero al mismo tiempo en que se protege al gobernado se tutela la integridad del ordenamiento jurídico, pues tampoco subsistirá acto alguno que desconozca el orden supremo que necesariamente debe regirlo. Con razón se dice que tal garantía protege desde la Ley Suprema hasta el más minucioso reglamento administrativo, que registra su más eficaz tutela en las disposiciones implicadas en dicho precepto.[34]

39. El artículo 16 es extraordinariamente amplio en su ámbito de tutela. El término “nadie” demarca desde el punto de vista subjetivo la asignación universal del derecho. Si esta primera línea se interpreta en sentido contrario, entonces toda persona cuya esfera jurídica sea susceptible de afectarse por la autoridad tiene el derecho a que tal afectación se realice con estricto apego a las seguridades constitucionales demarcadas por aquel precepto. Sin hipérbole se ha llegado a sostener que “los actos de autoridad que necesariamente deben supeditarse a las exigencias que establecen las garantías consagradas en la primera parte del artículo 16 constitucional, son todos los posibles imaginables”.[35] Y en cuanto a su amplitud material, la garantía de realidad protege prácticamente todas las manifestaciones de la personalidad. En efecto, la autoridad no puede perturbar de manera arbitraria o irregular a la persona sea en su individualidad psicofísica o en su personalidad jurídica propiamente dicha, pero tampoco podrá hacerlo en su familia, domicilio, papeles o posesiones.

40. Para lo que ahora interesa, es importante subrayar que las afectaciones autoritarias contra la persona proscritas por la disposición constitucional a comentario, pueden manifestarse en las siguientes variables:

- **a)** Cuando se le restringe o perturba su actividad o individualidad psicofísica propiamente dicha e, inclusive, su libertad personal;
- **b)** Cuando tal restricción o perturbación concierne a su capacidad jurídica de adquirir derechos y contraer obligaciones;
- **c)** En el caso de personas jurídicas, cuando se reducen o disminuyen las facultades inherentes a su entidad jurídica mediante el impedimento o la limitación del ejercicio de su actividad social; y
- **d)** Cuando se vulnera cualquier cualidad de la persona, como puede ser el caso de su nombre, su honor, familia, actividad o cualesquier elemento, situación o derecho.[36]

41. Con base en lo expuesto en los párrafos precedentes, se está en condiciones de adelantar un par de conclusiones. En primer lugar, que es inconcuso que tanto la Constitución y los tratados y convenciones suscritas por el Estado Mexicano en ejercicio de su soberanía, reconocen un derecho de valor genérico del que gozan todos los gobernados sin excepción. Por medio de ese derecho se pretende salvaguardar a la persona, familia, bienes, posesiones y derechos que deriven de actos u omisiones de las autoridades que les causen molestias. Por lo tanto, son contrarios a ese bloque de constitucionalidad todos los actos donde la autoridad afecta la esfera jurídica del gobernado sin atender a las exigencias vinculantes que disciplinan su actividad y sin cuya observancia esas manifestaciones de poder no pueden subsistir ni reputarse jurídicamente válidas.

---

33 Véase: *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, 10ª época, tomo III, libro 3, febrero de 2014, p. 2239.

34 Cfr. Burgoa, Ignacio, *Las garantías individuales,* 41ª ed., México, Porrúa, 2009, p. 589.

35 *Ibidem*, p. 591.

36 *Ibidem*, p. 593. En forma preliminar, como se verá más adelante, se estima que las autoridades señaladas como responsables violaron la garantía de legalidad en perjuicio de los quejosos precisamente en cuanto se le afectó en la forma señalada por el inciso a).

42. Y, después, que como se abundará más abajo, las afectaciones al derecho a la seguridad jurídica de los quejosos, pueden calificarse como actos de molestia que importaron una restricción a la libertad personal del quejoso, entendida bajo la modalidad de un menoscabo a la individualidad psicofísica al haberlo sometido a una detención que no satisfacía los requisitos señalados por el bloque de constitucionalidad y las leyes aplicables –es decir, que se ubican en la variable identificada en el inciso a) anterior–.

C. Caracterización de las detenciones arbitrarias

43. Con base en las consideraciones de los dos apartados precedentes, es dable ofrecer una caracterización de las detenciones arbitrarias esbozada a la luz de los precedentes interamericanos en la materia.

44. Según los precedentes establecidos por la CoIDH, el artículo 7º de la Convención ya mencionado, contiene como garantías específicas, descritas en sus incisos 2 y 3, la prohibición de detenciones o arrestos ilegales o arbitrarios, respectivamente. Según el primero de tales supuestos normativos, nadie puede verse privado de la libertad personal sino por las causas, casos o circunstancias expresamente tipificadas en la ley (aspecto material), pero, además, con estricta sujeción a los procedimientos objetivamente definidos por la misma (aspecto formal).[37]

45. De tal manera que, es el artículo 7.2 de la Convención el que establece las condiciones materiales y formales para la privación de libertad. Conforme a este precepto –al igual que lo ordena el artículo 16 de la Constitución– cuando ocurre una detención infraganti legítima es preciso que exista un control judicial inmediato de dicha detención, como medida tendiente a evitar la arbitrariedad o ilegalidad de la medida.[38]

46. Tan es así que, a juicio de otro precedente de la CoIDH, para los efectos del artículo 7.2 de la Convención, una detención, sea por un período breve, o una "demora", así sea con meros fines de identificación, constituyen formas de privación a la libertad física de la persona y, por ende, en tanto limitación a la misma debe ajustarse estrictamente a lo que la Convención Americana y la legislación interna establezcan al efecto, siempre y cuando ésta sea compatible con la Convención. Es decir, el artículo 7.2 de la Convención remite automáticamente a las disposiciones legales y constitucionales a nivel interno, por lo que cualquier requisito establecido en éstas que no sea cumplido, haría que la privación de libertad sea ilegal y contraria a la Convención Americana.[39]

47. Conforme a los preceptos constitucionales y convencionales bajo análisis, se desprende que son arbitrarias las decisiones que adopten las autoridades y que puedan afectar derechos fundamentales, tal como el derecho a la libertad personal, que no se encuentren debidamente fundamentadas.[40] Para calificar la legalidad de una detención la CoIDH ha recurrido a una especie de examen ampliado de proporcionalidad,[41] conforme al cual no es suficiente que toda causa de privación o restricción al derecho a la libertad esté prevista en la ley, sino que es necesario que esa ley y su aplicación sean compatibles con la Convención Americana, es decir, que respeten los requisitos determinados por el derecho convencional, a efectos de que dicha medida no sea arbitraria, a saber:

> i) que la finalidad de las medidas que priven o restrinjan la libertad sea legítima. Valga señalar que este Tribunal ha reconocido como fines legítimos el asegurar que el acusado no impedirá el desarrollo del procedimiento ni eludirá la acción de la justicia; ii) que las medidas adoptadas sean las idóneas para cumplir con el fin perseguido; iii) que sean necesarias, en el sentido de que sean absolutamente indispensables para conseguir el fin

37 Véase: *Caso Gangaram Panday Vs. Surinam. Fondo, Reparaciones y Costas*. Sentencia de 21 de enero de 1994. Serie C No. 16, párrafo 47.

38 Cfr. *Caso López Álvarez Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas*. Sentencia de 1 de febrero de 2006. Serie C No. 141, párrafos 60 y 64.

39 Véase: *Caso Usón Ramírez Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas*. Sentencia de 20 de noviembre de 2009. Serie C No. 207, párrafo 145 y *Caso Fleury y otros Vs. Haití. Fondo y Reparaciones*. Sentencia de 23 de noviembre de 2011. Serie C No. 236, párrafo 54.

40 Así, *Caso Palamara Iribarne Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas*. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 135, párrafo 216.

41 El cual, como se sabe tiene sus antecedentes en la aplicación de la Ley Fundamental de 1949, por parte del BVerfGE, sobre ello véase: Stone Sweet, Alec y Mathews, Jud, «Proportionality Balancing and Global Constitutionalism», en *Columbia Journal of Transnational Law* No. 47, 2008, *passim*. Y para una presentación general del principio de proporcionalidad, véase, además de la *Teoría de los derechos fundamentales* ya citada, los aportes de Robert Alexy en esta materia, por lo cual nos remitimos a Alexy, Robert, *Ensayos sobre la teoría de los principios y el juicio de proporcionalidad,* Lima, Palestra, 2019 y a Bernal Pulido, Carlos, *El principio de proporcionalidad y los derechos fundamentales. El principio de proporcionalidad como criterio para determinar el contenido de los derechos fundamentales vinculante para el legislador*, 4ª ed., Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2014.

> deseado y que no exista una medida menos gravosa respecto al derecho intervenido entre todas aquellas que cuentan con la misma idoneidad para alcanzar el objetivo propuesto. Por esta razón el Tribunal ha señalado que el derecho a la libertad personal supone que toda limitación a éste deba ser excepcional, y iv) que sean medidas que resulten estrictamente proporcionales, de tal forma que el sacrificio inherente a la restricción del derecho a la libertad no resulte exagerado o desmedido frente a las ventajas que se obtienen mediante tal restricción y el cumplimiento de la finalidad perseguida. Cualquier restricción a la libertad que no contenga una motivación suficiente que permita evaluar si se ajusta a las condiciones señaladas será arbitraria y, por tanto, violará el artículo 7.3 de la Convención.[42]

48. Sobre estas bases la Primera Sala de la SCJN ha determinado el conjunto de condiciones que debe reunir una detención para no ser considerada arbitraria. En la tesis 1a. CC/2014 (10a.), se previene que:

> El artículo 16, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé la siguiente descripción: "Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más cercana y ésta con la misma prontitud, a la del ministerio público. Existirá un registro inmediato de la detención.". Por su parte, los artículos 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos prevén como requisitos para que la detención de una persona sea válida que: 1. Sus causas y condiciones estén fijadas de antemano en la Constitución y en la ley; 2. Prohibición de la detención arbitraria; 3. La persona detenida debe ser informada, en el momento de su detención, de las razones de la misma, y notificada, sin demora, de los cargos formulados contra ella; 4. La persona detenida será llevada sin demora ante la autoridad competente que verifique la legalidad de la detención; 5. Se ordene su libertad si la detención fue ilegal o arbitraria.[43]

49. Como se aprecia, tanto a la luz de los precedentes internacionales, como de la propia interpretación realizada por los tribunales nacionales en materia de detenciones, se puede arribar a la identificación de dos especies:

a) ***Detenciones ilegales.*** Se encuentran previstas en el artículo 7.2 del Pacto de San José, de manera que, si se interpreta esta disposición en sentido contrario, resultará que se está en presencia de una detención ilegal en todos los casos donde una persona es objeto de un acto de molestia que afecta negativamente su libertad y seguridad personal, sin que se cumplan exactamente las causas y condiciones fijadas de antemano por el orden jurídico del Estado de que se trate. En el caso de las detenciones ilegales, se incumple con alguno de los requisitos que harían legítima la detención, por lo cual puede advertirse la satisfacción de algunos de ellos; sin embargo, ante el cumplimiento defectuoso de cualquiera de las condiciones establecidas por el orden jurídico vigente, la afectación a los derechos del sujeto debe reputarse como un acto ilícito de la autoridad. Las detenciones ilegales, por tanto, si se hubieran realizado con estricta observancia de sus requisitos, pueden tener causa legal o estar previstas en el ordenamiento, pero ante el defecto en la satisfacción de alguna de sus exigencias necesarias se tornan en una manifestación censurable del poder estatal.

b) ***Detenciones arbitrarias.*** Por su parte, en un grado extremo de ilicitud constitucional se encuentran las detenciones arbitrarias. Esta especie de afectaciones al principio de libertad y seguridad personales se encuentran previstas por el artículo 7.3 de la Convención Americana, en cuanto que nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios. La arbitrariedad en el derecho evoca la idea de un acto o proceder contrario a la justicia, la razón o las leyes dictado solo por voluntad o capricho de su autor, sin un razonamiento suficiente y sin explicación bastante de las razones en que se basa o careciendo estas de cualquier fundamento serio. En este caso, se configura una detención arbitraria cuando una persona es sometida a un acto de molestia sobre su libertad o seguridad sin que este sentido de afectación esté determinado por una norma legal aplicable. No se trata de que en la detención o arresto se hayan incumplido algunas exigencias de rigor, como en el caso de la primera

---

42 Cfr. *Caso Yvon Neptune Vs. Haití*, *cit*., párrafo 98.

43 Cfr. *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, 10ª época, libro 6, tomo I, mayo de 2014, p. 545.

especie, sino que en estos supuestos nos encontramos ante un grado máximo de desapego al orden jurídico en cuanto la detención o privación de la libertad ni siquiera está contemplada por el derecho positivo, sino que es la voluntad libérrima "arbitraria" de un agente dotado de imperio la única fuente en la que se sustenta el sentido de afectación al titular del derecho conculcado.

50. Ahora bien, las detenciones ilegales o arbitrarias, por lo general, son actos de tracto sucesivo en donde se pueden apreciar diversos momentos cronológicos e, incluso, la participación de distintas autoridades dependiendo de las funciones que el orden interno asigne a cada una de ellas. Sin embargo, el defecto generado por la contravención –en el primer caso– de las formalidades previstas o la ausencia completa de la base de sustentación para determinar el sentido del acto de molestia sobre el derecho a la libertad y seguridad personal –en el caso de la arbitrariedad– resultan predicables del procedimiento completo una vez que se genera el vicio o se priva de la libertad a una persona sin motivo para ello. Puede ser que existan autoridades ministeriales o administrativas encargadas de la custodia de las personas así privadas de la libertad que no hayan participado en la captura material, sin embargo, en cuanto que –como en el caso de los agentes del ministerio público o los jueces de barandilla– estos tengan potestades para hacer cesar el acto de molestia y permanezcan sin hacerlo, también deberán reputarse autores de la detención contraria a derecho.

51. Por lo tanto, en la especie –tal como se analizará más adelante– la actuación de los agentes de la policía municipal y del Juez Calificador deben reputarse como una detención arbitraria contrarias a los derechos de libertad personal y seguridad jurídica, pues se trató de una perturbación de la libertad deambulatoria perpetrada por la autoridad, *sin contar con ningún requisito legal, constitucional y convencional que rigen en este campo*, en particular, porque la autoridad privó –así sea por un breve periodo de tiempo– a los gobernados de su libertad personal sin contar con una orden judicial ni actualizarse alguno de los supuestos para proceder al arresto administrativo.[44] En la especie está probado que fueron solo inferencias asumidas por los agentes de la policía las que llevaron a decretar el arresto, sin que a los elementos les constara o estuviera acreditada la existencia de ninguna falta al orden municipal o local. Por lo demás, en cuanto la actuación del Juez Calificador prolongó este estado de cosas al mantener el sentido de afectación –e incluso nunca resolver sobre la situación jurídica ni cerciorarse del estado integral de los sujetos que le fueron consignados conforme a los estándares aplicables– se puede concluir que la actuación de este funcionario también participa de la naturaleza arbitraria ya destacada.

52. Ahora bien, en cuanto las detenciones proscritas por el bloque de constitucionalidad atienden a las reglas legales determinadas en los órdenes jurídicos de cada Estado –como sujeto de responsabilidad internacional– en lo que sigue no será ocioso analizar cuál es el régimen aplicable a las detenciones administrativas (arrestos).

D. El régimen jurídico de los arrestos y sanciones aplicables por la comisión de faltas administrativas

53. Es momento ahora de revisar las condiciones y requisitos que, conforme al imperativo de seguridad jurídica y, en especial, a la garantía de legalidad deben cumplirse en las detenciones de personas a fin de que sean realizadas legalmente. En particular, se hace pertinente señalar que el régimen legal de las detenciones en nuestro sistema jurídico obedece a dos vertientes principales:

a) Las detenciones realizadas en virtud de la probable comisión de un delito, sea mediante la regla general del cumplimiento de una orden de aprehensión o en los casos excepcionales de urgencia y flagrancia;[45] y

---

44 Cfr. Ramírez García, Hugo, y Pallares Yabur, Pedro, *Derechos humanos*, México, Oxford University Press, 2011, p. 188.

45 El régimen aplicable en este primer elenco de supuestos se halla previsto en los párrafos tercero a séptimo y décimo del artículo 16 constitucional, que textualmente determinan: "***Artículo 16.*** *[…] No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión.- La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión, deberá poner al inculpado a disposición del juez, sin dilación alguna y bajo su más estricta responsabilidad. La contravención a lo anterior será sancionada por la ley penal.- Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad civil más cercana y ésta con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. Existirá un registro inmediato de la detención.- Sólo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave así calificado por la ley y ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o circunstancia, el Ministerio Público podrá, bajo su responsabilidad, ordenar su detención, fundando y expresando los indicios que motiven su proceder.- En casos de urgencia o flagrancia, el juez que reciba la consignación del detenido deberá inmediatamente ratificar la detención o*

b) En los casos de detenciones realizadas por la autoridad administrativa, particularmente, dentro del orden municipal, en razón de infracciones cometidas a los bandos de policía y buen gobierno.

54. Esta distinción inicial es importante porque permite situar a los hechos del caso dentro de una calificación jurídica más amplia, a partir de la cual pueden desprenderse las seguridades constitucionales con las que se encuentra revestida cada una de las limitaciones legítimas a la libertad personal. En efecto, en el caso, los hechos encuadran específicamente en el supuesto identificado en el inciso b), es decir, los quejosos fueron arrestados al habérseles imputado la comisión de una falta administrativa, sin que los acontecimientos en los que se vieron inmersos importaran relevancia penal alguna.

55. Según se desprende del informe rendido por el **PROF. JOSÉ LUIS FIGUEROA RANGEL,** en su calidad de Presidente Municipal de Loreto, en el caso, los quejosos no fueron detenidos en virtud de que se les imputara la ejecución de un hecho criminal, sino porque se consideró que habían cometido una infracción administrativa, de manera que, previo pago de una multa, fueron puestos en libertad. Es un hecho indubitado, en tanto que se acepta por todas las partes implicadas en la integración del expediente de queja, que los arrestados fueron puestos a disposición de la "[…] Dirección de Seguridad Pública ante el Juez Calificador para efectos de que conforme a lo que por derecho proceda se haga cargo de las personas, es el caso que en efecto, previo el pago de multa correspondiente fueron liberados, pues ante la infracción administrativa en que incurrieron, con el pago de su multa deben ser dejados en libertad como así fue informado por el Director de Seguridad Pública de éste municipio de Loreto, toda vez que no se advirtió que se estuviera cometiendo un ilícito".

56. Por lo tanto, este elemento probatorio constituye un hecho acreditado dentro del expediente y, por su sentido, comporta la conclusión de que las seguridades constitucionales que rigen de manera directa e inmediata los deberes que las autoridades tenían que ventilar en la especie, eran las relacionadas con el régimen general de las sanciones administrativas, específicamente en cuanto a las condiciones legales para imponer una medida de arresto y multa, ya que, como se ha visto, la privación de la libertad de los quejosos obedeció a hechos considerados sancionables en la sede de la justicia municipal. Por tanto, lo procedente es analizar las disposiciones del orden supremo en la parte donde se faculta a los Municipios, en cuanto orden de gobierno, para imponer sanciones administrativas a los gobernados.

57. El régimen de sanciones administrativas donde los municipios actúan como ente coactivo se encuentra previsto en los artículos 21 y 115 de la Constitución. En este sentido, el artículo 21, en sus párrafos cuarto a sexto, dispone:

> **Artículo 21.** […]
>
> Compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán en multa, arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad; pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto, se permutará esta por el arresto correspondiente, que no excederá en ningún caso de treinta y seis horas.
>
> Si el infractor de los reglamentos gubernativos y de policía fuese jornalero, obrero o trabajador, no podrá ser sancionado con multa mayor del importe de su jornal o salario de un día.
>
> Tratándose de trabajadores no asalariados, la multa que se imponga por infracción de los reglamentos gubernativos y de policía, no excederá del equivalente a un día de su ingreso.

58. Y el artículo 115 constitucional, al establecer las bases generales para la organización interna de los municipios determina, en su fracción II:

> **Artículo 115.** Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes:

---

decretar la libertad con las reservas de ley. […] Ningún indiciado podrá ser retenido por el Ministerio Público por más de cuarenta y ocho horas, plazo en que deberá ordenarse su libertad o ponérsele a disposición de la autoridad judicial; este plazo podrá duplicarse en aquellos casos que la ley prevea como delincuencia organizada. Todo abuso a lo anteriormente dispuesto será sancionado por la ley penal."

> […]
> II.- Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley.
> Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal.

59. Con base en los artículos mencionados se advierte la existencia de sendas seguridades constitucionales con las que está acotado el ejercicio del derecho administrativo sancionador discernido a favor de los municipios y consejos municipales. En efecto, los ayuntamientos y los consejos municipales, como autoridades con funciones administrativas, podrán, a través de los reglamentos gubernativos y de policía, hacer valer sus facultades de imperio y lograr la obediencia de los particulares a través de la imposición de medidas coactivas contra la libertad y el patrimonio de los gobernados.

60. En las disposiciones transcritas se encuentra la base del poder sancionatorio de las autoridades administrativas, el cual, por lo demás, describe una relación de supra a subordinación con los gobernados, ya que la posibilidad de los ayuntamientos para prever y sancionar la comisión de faltas administrativas supone una potestad coercitiva afincada sobre la facultad legislativa reconocida en el artículo 115 constitucional. Por lo tanto, el conocimiento de las infracciones y su ejecución, es exclusivo de la autoridad administrativa municipal. En ellas no tienen injerencia alguna las instancias encargadas de investigar y sancionar los hechos criminales, pues como se ha visto, lo que está de por medio es una infracción reglamentaria y no la comisión de un delito.

61. Con todo y que los reglamentos administrativos de policía y buen gobierno solo pueden ser emitidos por los ayuntamientos o los consejos municipales a través de normas de observancia general, en su sentido y alcance se encuentran límites que no pueden trasponerse. En principio, como manifestación del derecho administrativo sancionador, a las conductas tipificadas les resultan aplicables, en lo conducente, los limites sustantivos del derecho del Estado a castigar o, diríase, del derecho penal en sentido subjetivo. En efecto, a partir de un análisis integral del régimen de infracciones administrativas, se desprende que el derecho administrativo sancionador posee como objetivo garantizar a la colectividad en general, el desarrollo correcto y normal de las funciones reguladas por las leyes administrativas, utilizando el poder de policía para lograr los objetivos en ellas trazados. En este orden de ideas, la sanción administrativa guarda una similitud fundamental con las penas, toda vez que ambas tienen lugar como reacción frente a lo antijurídico; en uno y otro supuesto la conducta humana es ordenada o prohibida.

62. En consecuencia, tanto el derecho penal como el derecho administrativo sancionador resultan ser dos inequívocas manifestaciones de la potestad punitiva del Estado, entendida como la facultad que tiene éste de imponer penas y medidas de seguridad ante la comisión de ilícitos. Ahora bien, dada la similitud y la unidad de la potestad punitiva, en la interpretación constitucional de los principios del derecho administrativo sancionador puede acudirse a los principios penales sustantivos, aun cuando la traslación de los mismos en cuanto a grados de exigencia no pueda hacerse de forma automática, porque la aplicación de dichas garantías al procedimiento administrativo sólo es posible en la medida en que resulten compatibles con su naturaleza. Desde luego, el desarrollo jurisprudencial de estos principios en el campo administrativo sancionador –apoyado en el Derecho Público Estatal y asimiladas algunas de las garantías del derecho penal– ha ido formando principios sancionadores propios para este campo de la potestad punitiva del Estado, sin embargo, aun así es válido tomar de manera prudente las técnicas garantistas del derecho penal.[46]

63. Desde el texto constitucional se advierten valladares infranqueables a la potestad sancionatoria de los reglamentos administrativos. Así, los jornaleros, obreros y trabajadores no pueden ser sancionados con una multa que sea mayor del importe de su jornal o salario de

---

46 Cfr. *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, 9ª época, tomo XXIV, agosto de 2006, p. 1565.

un día de trabajo. Los máximos para la imposición de sanciones pecuniarias a favor de estas tres categorías de sujetos son aplicables a todos los reglamentos. Sin embargo, las limitaciones no terminan en eso, pues en tanto que los actos coactivos derivados de la aplicación reglamentaria suponen la actualización de actos de molestia o privación de bienes (dinero) para los gobernados, ellos son objeto de regulación por otras tantas manifestaciones sustantivas de la seguridad jurídica y el principio de legalidad. Así, en los reglamentos gubernativos también se deberán respetar los derechos de audiencia y defensa de los infractores, a favor de quienes opera el principio de presunción de inocencia al ser acusados por la comisión de alguna falta y quienes además deben tener las condiciones necesarias para conocer cuáles son los hechos que se les imputan y las posibles consecuencias desfavorables consiguientes de que pueden ser objeto.

64. Después de todo, en virtud de las premisas expuestas y en atención a lo dispuesto por los artículos 16, 21 y 115 constitucionales, se colige la existencia de un conjunto de parámetros conformadores del sistema constitucional aplicable a las detenciones y los arrestos ordenados por las autoridades administrativas municipales en el ámbito de sus respectivas competencias:

(1) Las autoridades administrativas, en especial, las policías preventivas municipales pueden realizar arrestos siempre que se advierta la comisión de una falta administrativa prevista y sancionada por los reglamentos de policía y buen gobierno expedidos por los ayuntamientos.

(2) Los arrestos solo podrán realizarse en el momento en que se esté cometiendo la falta administrativa, sin que en este caso pueda aplicarse la regla concerniente a las detenciones inmediatamente después de que aquella se haya cometido, pues el artículo 16 se refiere a las detenciones en flagrancia únicamente en los casos de hechos preliminarmente considerados como delictivos, sin que bajo ningún supuesto las faltas administrativas previstas y sancionadas en los reglamentos de policía y buen gobierno importen la consumación de un ilícito criminal.

(3) Las personas que sean arrestadas por la aparente comisión de una falta administrativa deberán ser puestos a disposición inmediata de la autoridad administrativa correspondiente en el ámbito de la justicia municipal (barandilla), toda vez que cualquier retraso injustificado en la consignación del detenido configurará un arresto arbitrario prohibido por el bloque de constitucionalidad.

(4) Las sanciones imponibles a los infractores solo podrán consistir en multa –no mayor a un jornal o a un día de salario en el caso de jornaleros, obreros y trabajadores– o arresto hasta por 36 horas.[47]

(5) Las garantías constitucionales contenidas en los artículos 14, 21, 22 y 23 (que se refieren a las reglas y limitaciones para la imposición de penas) son aplicables tratándose de infracciones y multas administrativas, y a los procedimientos relativos, pues en todos esos casos se trata de la imposición de sanciones por violación a la ley y tanto las multas administrativas, como las penales, participan en alguna forma de la misma naturaleza y tienen el mismo origen y la misma finalidad, siendo de notarse que, en algunos casos, la sanción penal puede reducirse a la sola multa, y que los motivos de justicia y protección a la dignidad de la persona humana que rigen tales garantías tienen la misma validez en todos los casos apuntados, y tienden con las mismas bases a limitar la actuación despótica del Estado.[48]

(6) Para que la imposición de multas por parte de autoridades administrativas se justifique legalmente, tratándose de infracciones a leyes o reglamentos gubernativos o de policía, es necesario no sólo que dichas autoridades se apoyen en un precepto de carácter general, sino también que comprueben fehacientemente la existencia del hecho o hechos en que se haga consistir la falta, es decir, de los hechos que determinen la aplicación de la norma en el caso

---

47 Sobre ello la Primera Sala de la SCJN estableció que "cuando las sanciones que imponen las autoridades administrativas tienen como sede reglamentos gubernativos o de policía, éstas sólo podrán consistir en multa o en arresto hasta por treinta y seis horas, en términos del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; sin embargo, cuando tales sanciones sean impuestas con fundamento en la ley, resulta incuestionable que no pueden constreñirse a la multa o al arresto, sino que válidamente procede la imposición de diversos correctivos, como puede ser el decomiso de mercancías o cualquier otro que contemple la legislación aplicable." Cfr. *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, 9ª época, tomo XIX, junio de 2004, p. 242.

48 Cfr. *Semanario Judicial de la Federación*, 7ª época, Volumen 48, Sexta Parte, p. 23.

concreto. Cuando no cumplen con tales requisitos, violan las garantías consignadas en el artículo 16 constitucional, por falta de motivación debida de sus actos.[49]

(7) En cuanto a los elementos de convicción requeridos para sustentar la imposición de las sanciones indicadas en la regla (4), los precedentes establecidos por la jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación, son contestes en el sentido de que la constancia y copia de la orden de partes de Comandancia de Policía Municipal devienen insuficientes para acreditar plenamente que una persona estuvo internada en la cárcel preventiva por faltas cometidas en contra del reglamento de policía y buen gobierno, si dichas documentales no están debidamente apoyadas o robustecidas con el expediente que se haya formado ante la autoridad municipal que conoció de la falta respectiva, pues todas las actuaciones que se practiquen con motivo del procedimiento que se instaure por la autoridad que conozca de una falta de las contempladas en dicho ordenamiento, deben constar fehacientemente con todos los elementos indispensables para garantizar el conocimiento completo y la posterior defensa por parte del gobernado.[50] Por tales motivos, es correcto desestimar las constancias de mérito y, ante la falta de mayores elementos documentales, considerar que la molestia a la libertad personal o las consecuentes sanciones impuestas resultan contrarias a derecho.

65. Los parámetros de acción establecidos en las reglas (1) a (7) son constitutivos de otras tantas posiciones iusfundamentales relacionadas con los artículos 14, 16, 21, 22 y 23 constitucionales. Sin embargo, las seguridades constitucionales con las que se reviste al acto coactivo tienen una naturaleza variada, en cuanto se refieren a exigencias de carácter procedimental, cuando atañan a las fases previas para la imposición de una sanción válida; como sustantivo, como es el caso del deber de las autoridades para consignar a los arrestados sin demora ante la justicia municipal o la prohibición de imponer sanciones adicionales a las previstas por el artículo 21 de la Constitución. En lo particular, las garantías sustantivas aplicables a los arrestos, hallan su base de sustentación en los principios de seguridad jurídica y protección de la libertad personal en el campo del derecho administrativo sancionador. En tato todo ello es así, los limites analizados se convierten en un parámetro de acción inexorable para la autoridad, al grado de que sus actos no podrán subsistir o tener efectos si se realizan en contravención a aquellos principios. Y, a juicio de la Comisión, esto fue exactamente lo que aconteció en la especie. Para ello, analicemos la argumentación del apartado siguiente.

E. Acreditación de las violaciones a los derechos fundamentales de los quejosos

I. Delimitación inicial

66. Antes de entrar en materia, la Comisión estima pertinente aclarar que los únicos hechos relevantes para la investigación de la queja son los que ocurrieron desde momentos después de las veintiuna horas del día 25 de enero de 2020, cuando los quejosos fueron arrestados por los elementos de la policía municipal de Loreto y hasta el momento en que **Q1**y **Q2** fueron puestos en libertad en las instalaciones de la justicia municipal, aproximadamente dos horas después. En este sentido, la Comisión no hará pronunciamiento alguno sobre la controversia del orden familiar que subyace entre el quejoso **Q1** y **T1** en relación con la guardia y custodia de los menores **M1** y **M2** y, en especial, sobre los hechos ocurridos el 25 de diciembre de 2019. Particularmente sobre este último asunto, la Comisión destaca la ausencia de relación con los hechos de la queja. Es decir, en esta sede no se analizará si los acontecimientos del día 25 de diciembre de 2019, ocurrieron de la manera en que los narran los diversos intervinientes en ellos. Tan es así que ni siquiera el quejoso **Q1** formula motivo de inconformidad sobre los hechos acaecidos en aquellas circunstancias. Y si bien, todos los participantes en los hechos materia de la investigación comienzan su relato por aquel antecedente, debe destacarse incluso el talante auto-compositivo de todas las partes involucradas en cuanto que los menores fueron reintegrados en el hogar materno de manera voluntaria. Por lo demás, no está siendo examinado en esta sede –ni mucho menos es competencia de la Comisión– determinar cuál de los progenitores (es decir, **Q1**y **T1**) tiene mejor derecho para gozar de la guardia y custodia sobre sus hijos, pues esta determinación pasa por una resolución cuyo dictado es una atribución exclusiva de las autoridades judiciales mediante el desahogo de los procedimientos especializados para dichos propósitos.

---

49 Véase: *Semanario Judicial de la Federación*, 6ª época, Volumen III, Tercera Parte, p. 145.

50 Cfr. *Semanario Judicial de la Federación*, 8ª época, tomo XIV, julio de 1994, p. 458.

67. Por identidad de razón, tampoco se analizará ni se hará pronunciamiento alguno sobre la investigación criminal, que según obra constancia en el expediente, fue iniciada por la denuncia de **T1** en contra de **Q1**por el delito de violencia intrafamiliar, registrada bajo el número de expediente […] ni sobre las medidas de protección decretadas por la Fiscal del Ministerio Público adscrita al Módulo de Atención Temprana del Distrito Judicial de Loreto. Lo anterior es así, porque todos estos actos jurídicos o procedimientos legales son de naturaleza jurídica distinta a los investigados, de modo que pronunciarse sobre ellos o referirse a ellos en esta recomendación implicaría una deficiencia técnica en el tratamiento del asunto, pues ello sería tanto como distorsionar la amplitud de los sucesos directamente relacionados con las violaciones investigadas.

68. Las salvedades anteriores son relevantes por dos motivos. En primer lugar, porque delimitan las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos donde ocurrieron las violaciones investigadas por la Comisión. En suma, se trata de concentrarse solo en los hechos relevantes para depurar la materia de la controversia iusfundamental solo a las manifestaciones de la conducta realizada por los agentes de la autoridad que significó una intromisión injustificada en los derechos de los quejosos. Por otra parte, definir en estos términos la amplitud fáctica del examen supone la elaboración de una regla de método a tenor de la cual se dibujan con claridad las comarcas competencias propias de la Comisión de aquellas diversas donde solo distintas autoridades judiciales o ministeriales pueden intervenir.

II. Los hechos relevantes

Establecidas las salvedades del apartado previo, se entrará al estudio de los hechos relevantes del caso.

69. En atención a los elementos documentales recabados durante la integración del expediente en que se actúa, esta Comisión puede adentrarse en el estudio de los hechos violatorios de los derechos fundamentales de **Q1** y **Q2**. Sobre lo anterior, este Organismo considera que los quejosos fueron víctimas de una detención arbitraria por parte de diversos elementos de la policía preventiva municipal de Loreto. En especial, se estima que quedó demostrada la existencia de vulneraciones a los derechos a la legalidad y seguridad jurídica de los detenidos, en cuanto que fueron objeto de molestias en su libertad deambulatoria y, al primero de los mencionados se le impuso una sanción pecuniaria cuyos presupuestos de aplicación no quedaron suficientemente probados por parte del Juez Calificador con residencia en el municipio de Loreto.

70. En efecto, los quejosos fueron detenidos –como la propia autoridad lo reconoce– sin que en el momento de la captura se estuviera ejecutando una conducta calificada como falta por la reglamentación municipal o como delito en términos de las normas de defensa social aplicables. Es verdad que a los entonces detenidos se les imputan hechos previos, como haberse presentado en las instalaciones de un salón de eventos sociales, donde provocaron escándalo, pero es aceptado por todas las partes que entre esos acontecimientos y el arresto de que fueron objeto los quejosos no existió solución de continuidad. Se dice, además, que, al momento de ser detenidos, los quejosos se mostraron agresivos o que, incluso, se encontraban bajo la intoxicación por el consumo de bebidas alcohólicas –lo cual si bien es aceptado en algún extremo por **Q1** quien confiesa haber ingerido cerveza–, no está demostrado en forma fehaciente por la autoridad sancionadora que se hayan realizado las pruebas pertinentes para demostrar si este quejoso se encontraba ebrio y en qué grado; lo cual era indispensable para acreditar su responsabilidad en la comisión de la falta que se le hubiere imputado.

71. En la medida en que los elementos captores arrestaron a los quejosos por las simples manifestaciones de hechos pasados, que ellos no percibieron directamente, se configura una conducta contraria al derecho a la legalidad y seguridad jurídica, en concatenación a no ser objeto de detenciones arbitrarias. Y en cuanto, las condiciones para la imposición de la sanción pecuniaria impuesta por el Juez Calificador de Loreto a **Q1,** tampoco explicita las razones para tener por demostrado el hecho condición de la sanción, ni los elementos para individualizar –en el caso concreto– la cuantía de ese acto sancionador, se estima que tal agente de la

autoridad procedió contra el principio de legalidad al no fundar ni motivar adecuadamente el acto privativo sobre el patrimonio del gobernado. Esto es así porque, de un estudio exhaustivo de las constancias, se arriba a la conclusión de que la autoridad de la justicia municipal, fue omisa al determinar cuál era exactamente la conducta sancionada, y en qué consistían los elementos fácticos y jurídicos que se tomaron en cuenta, para determinar la cuantía de la sanción económica aplicable, ni tampoco obra constancia de que el funcionario administrativo se haya cerciorado de cuáles eran las condiciones particulares del detenido, de modo que tuviera forma de saber si se trataba de un jornalero, obrero o trabajador cuyas percepciones diarias podrían ser inferiores a la sanción impuesta.

72. Para mayor claridad de esta recomendación, conviene analizar por separado la actuación de los elementos de la policía preventiva municipal que participaron en el arresto de **Q1** y **Q2** y, luego, la actuación del Juez Calificador que individualizó la sanción imponible a **Q1**en virtud de las presuntas faltas administrativas que se le atribuyeron.

- **La actuación de los elementos de la policía preventiva:**

73. En la detención de los quejosos **Q1**y **Q2**, participaron diversos elementos de la policía municipal de Loreto, quienes fueron identificados de manera indubitable durante la integración del expediente. Así, en las comparecencias desarrolladas ante la Visitadora Regional de la Comisión en general se puede apreciar una narración conteste sobre los hechos ocurridos el 25 de enero de 2020, que son los directamente relacionados con la queja que se investiga. Con base en las constancias del expediente se desprende la participación directa de los elementos de la policía municipal **JAIME ALFONSO MARENTES MARENTES, LUIS AGUILAR CERVANTES** y **MARÍO REYES VÁSQUEZ.** Según las declaraciones transcritas en el apartado V, todos ellos tuvieron participación en los hechos acontecidos entre las veintiuna y las veintitrés horas del día 25 de enero de 2020 donde fueron detenidos los quejosos.

74. Respecto de la versión de los hechos relevantes expuesta por los elementos policiacos involucrados, la Comisión destaca la uniformidad narrativa. Si se atiende con detalle al texto de las comparecencias se podrá advertir que la versión es semejante, salvo por detalles incidentales que en nada afectan la coherencia general, y que se deben mayoritariamente, a la diferenciación de roles desempeñados por cada uno de los elementos durante el arresto. Para mayor abundancia de detalles, la versión de los elementos policiales se corrobora mediante la versión de los hechos expuesta por el Presidente Municipal de Loreto en el informe de autoridad.

75. En relación a esos medios de prueba la Comisión estima que son aptos para generar convicción respecto de los hechos narrados en ellos. Respecto del informe rendido por el Presidente Municipal, se trata de un de documento suscrito por un funcionario en ejercicio de sus atribuciones de derecho público que, además, en cuanto a su contenido, resulta corroborado en lo esencial con la propia versión de los hechos narrada por los quejosos en las declaraciones trascritas en el apartado V de esta recomendación. Finalmente, las declaraciones de los elementos policiales expresadas durante la comparecencia, se realizaron ante un funcionario investido de fe pública conforme al artículo 149 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, lo cual hace prueba plena de que esas manifestaciones que se produjeron sin coacción y con pleno conocimiento de su sentido y consecuencias.

76. Así las cosas, en relación con los hechos relevantes atribuidos a los elementos policiacos, la Comisión estima probados los siguientes enunciados fácticos:

a) En primer lugar, que la presencia de los elementos de policía en el salón de fiestas donde se habían presentado los quejosos momentos antes del arresto, se debió a un reporte recibido por los elementos de seguridad, alrededor de las veintiuna horas del día 25 de enero de 2020.

b) Es aceptado por todas las partes que cuando los elementos de policía llegaron al salón de fiestas, los quejosos ya no se encontraban en ese sitio.

c) También se tiene por probado que en el salón de eventos se encontraban **T1** y los dos menores hijos de ella y **Q1,** por lo que ante las manifestaciones de **T1**, en el sentido de que el quejoso se quería llevar a los menores a la fuerza, los elementos de policía decidieron dar rondines por la zona para brindar seguridad a los autores del reporte.

d) Mientras se encontraban patrullando en las inmediaciones, los policías se percataron que el quejoso regresaba al salón de fiestas en una camioneta, por lo que le dieron alcance y le solicitaron que apagara vehículo y bajara de él, todo lo cual se verificó de manera voluntaria.
e) En la inspección personal de rutina practicada a **Q1** no se encontró que portara ningún arma.
f) El arresto de los quejosos **Q1** y **Q2** se realizó el 25 de enero de 2020, momentos después de las veintiuna horas con quince minutos por **JAIME ALFONSO MARENTES MARENTES, LUIS AGUILAR CERVANTES** y **MARIO REYES VÁSQUEZ** en su calidad de elementos pertenecientes a la Policía Municipal de Loreto.
g) Con base en las declaraciones de los elementos participantes en el arresto, se colige –en sus propios términos– que la orden de detener a **Q1** provino del comandante de la policía **MARIO REYES VÁSQUEZ** y que al momento del arresto "el quejoso no estaba haciendo nada, [sino que] la detención del quejoso se debe al reporte que se hace por parte de la señora y a que al momento de la revisión se percatan de que está en estado etílico y así estaba manejando".
h) El comandante ordenó también la detención de **Q2** "que acompañaba al ahora quejoso, y el motivo de la detención de la señora es porque acude a la fiesta a junto con el quejoso a molestar a los presentes".
i) Es el caso que **Q2** fue conducida a las instalaciones de la comandancia municipal en el propio vehículo del quejoso, por lo que el elemento **LUIS AGUILAR CERVANTES**, quien "al llegar a la comandancia dejó a la señora con el alcaide junto con el ahora quejoso"

77. Los hechos probados en relación con la actuación de los elementos captores son una reconstrucción coherente y consistente con las constancias del expediente. Ellas reconstruyen los hechos en forma lógica, de tal modo que muestran con claridad el momento donde se consumaron las violaciones de derechos de los quejosos.

78. En efecto, se ha dicho que en materia de faltas administrativas los elementos de la policía municipal solo podían detener al quejoso en el momento en el cual se estuviera ejecutando la conducta proscrita por la normatividad aplicable. Sin que en esos supuestos opere la regla –existente para la flagrancia– a tenor de la cual la privación de la libertad puede realizarse inmediatamente después de cometido el hecho. Sin embargo, en el caso no existió ni siquiera una solución de continuidad entre la comisión de las presuntas faltas y el arresto de **Q1**. Según se refiere, cuando los policías llegaron al salón de eventos tanto **Q1** y **Q2** ya no se encontraban en el lugar. Por el contrario, los hechos por los que se lleva a cabo la detención posterior son puestos en conocimiento de los elementos por inferencias de terceros que los presenciaron. Es por ello que decidieron efectuar rondines por la zona, donde, a la postre, fueron arrestados los quejosos. Las declaraciones de los elementos captores demuestran que la orden de captura fue emitida en forma discrecional por el comandante de policía, a pesar de que al quejoso no se le encontró arma alguna y, en ese momento, ya no estaba haciendo nada. No pasa desapercibido que los captores, asimismo, refieren que **Q1**se encontraba en estado de ebriedad al momento de la detención. Sin embargo, no obra en el expediente ningún elemento adicional para demostrar este extremo. Como ya se indicó, el quejoso acepta haber consumido "una caguama" momentos antes de presentarse en el salón de eventos; empero, esa manifestación, es en sí misma insuficiente para relevar a la autoridad de la carga de la prueba de que el quejoso en efecto conducía bajo los efectos del alcohol. Esto es así, porque no basta con que se acepte el consumo de una cerveza para que en automático el gobernado se haga acreedor a una sanción administrativa. Para ello, en el momento de la revisión, los agentes deberían haberse cerciorado, por medio de las pruebas oportunas a su alcance, que el estado de intoxicación del quejoso era tal que colmaba el tipo administrativo determinado por las normas de tránsito, como condicionante para la actualización de la falta y la consecuente sanción.

79. Debe quedar claro que, con la afirmación anterior, la Comisión no quiere solapar las conductas arriesgadas e ilegales de las personas que diariamente cometen la imprudencia de conducir vehículos automotores en estado inconveniente. Tampoco se pretende cuestionar la acción decidida de los cuerpos de seguridad para sancionar y reprimir esa clase de comportamientos prohibidos. Lo que es contrario a la Constitución, y esta Comisión está en el

deber de señalar y censurar, es que se obvien, en perjuicio de los gobernados, las seguridades constitucionales que la autoridad está obligada a observar. Es decir, lo que es contrario al orden constitucional es que, la apreciación de la ilegalidad de las conductas quede al libérrimo arbitrio de los elementos policiales, para decidir cuándo, cómo y por qué detener a las personas o bajo qué indicios subjetivos e irrepetibles –en cuanto no queda constancia de ellos– puede considerarse que las personas han cometido alguna falta. Puede ser una labor de justicia que personas que alteren el orden sean sujetas al procedimiento legal correspondiente y lo importante es que el derecho, por medio del principio de seguridad jurídica, determina cuándo es dable enderezar el aparato coactivo del Estado en contra de esas personas. No se trata de que las policías ejerzan la justicia del Cadí en cada caso que les parezca oportuno esté o no ordenado por la ley. Eso es lo verdaderamente oprobioso.

80. El quejoso **Q1** fue detenido hasta momentos después de que presuntamente perturbó el orden público, cuando los agentes de la autoridad ya no estaban facultados para ello, y sin que se haya levantado una constancia documental fehaciente –más allá del propio dicho de los captores–, de que se encontraba en estado de intoxicación etílica. Y, para mayor abundamiento inri en la actuación policial, en virtud de la falta de inmediatez entre los hechos imputados en el salón de fiestas y la llegada de los elementos de policía, sólo cabe concluir que la captura se dio mediante inferencias que los policías realizaron con base en dichos de terceros y respecto de hechos que no les constaban por haber presenciado la falta en el momento de su ejecución.

81. La situación de la quejosa **Q2** es aún más apremiante al momento del arresto. Si bien es verdad que ella acompañaba al quejoso en el momento de los disturbios ocurridos en el salón de eventos y, luego, al momento en que los captores les pararon el alto para realizarle a **Q1**una revisión personal. No es menos verdadero que los propios elementos refieren que la orden de arrestarla a ella también, fue tomada de manera unilateral por el comandante de los elementos participantes en la diligencia, esto es de **MARIO REYES VÁSQUEZ**. Por lo demás, el procedimiento con el que se trató la detención de la segunda quejosa presenta visos de notoria irregularidad. Así las cosas, a pesar de que no se le imputaron hechos propios constitutivos de alguna falta, pues aun cuando se hubiere encontrado en estado de ebriedad, ella no manejaba el vehículo, la quejosa fue detenida por el solo ucase del comandante. No obra ninguna constancia en donde se le haya practicado alguna revisión personal o prueba alguna para determinar objetivamente si se encontraba verdaderamente en estado inconveniente. Por lo demás, es a todas luces irregular que estando ilícitamente detenida se le haya conducido a la comandancia en el propio vehículo del quejoso **Q1**y en compañía de un elemento policiaco.

82. En el caso de la detención de la señora **Q2,** podría hablarse de una grave privación de la libertad que se dictó en su contra, por la sola voluntad discrecional del comandante de la policía preventiva del municipio de Loreto. La declaración del elemento **LUIS AGUILAR CERVANTES** es particularmente ilustrativa respecto de la ilegalidad de la detención de la quejosa, especialmente cuando refiere que el comandante le ordenó que “también se detenga a la señora que acompañaba al ahora quejoso, y el motivo de la detención de la señora es porque acude a la fiesta a junto con el quejoso a molestar a los presentes, pero como la señora se niega a la detención me dice el comandante que me la lleve en la misma camioneta del quejoso, por lo que procedo a llevármela en la misma camioneta y al llegar a la comandancia dejo a la señora con el alcaide junto con el ahora quejoso”. Como se aprecia, la situación jurídica de la detención de **Q2,** en términos jurídicos fue especialmente comprometida pues revela en grado predominante el carácter discrecional y arbitrario con el que se condujeron los elementos captores.

83. Desde luego, tampoco para la quejosa **Q2** se siguieron las exigencias de la seguridad jurídica y la garantía de legalidad. No fue así porque tampoco fue arrestada en el momento justo en el que cometía la falta que le fue atribuida, ya que el arresto ocurrió hasta el momento en que los elementos les marcaron el alto momentos después de haberse entrevistado con los asistentes al salón de eventos que formularon el reporte. Y, además, porque no existen elementos objetivos en el expediente formado con motivo de la queja que acrediten, más allá de toda duda razonable, que en el momento de la captura se haya verificado la existencia de algún ilícito que justificara la privación de la libertad.

84. En suma, los elementos de la policía **JAIME ALFONSO MARENTES MARENTES, LUIS AGUILAR CERVANTES** y **MARÍO REYES VÁSQUEZ** incumplieron en perjuicio de **Q1** y **Q2**, las reglas (1) y (2) del sistema constitucional para los arrestos administrativos en la medida en que (1) los policías preventivos municipales realizaron el arresto sin cerciorarse que se actualizaba alguna falta prevista y sancionada en el ordenamiento municipal, esto es así porque no existe ningún indicio objetivo que justificara el arresto practicado. Además de lo anterior, la detención se realizó a pesar de que los quejosos no estaban haciendo nada, sino que la captura se debió únicamente al reporte hecho por los asistentes al salón de eventos donde los quejosos se presentaron en momentos previos a la privación de la libertad. Con ello se incumplió también la regla (2) del sistema descrito en cuanto a que los arrestos solo podrán realizarse en el momento en que se esté cometiendo la falta administrativa, sin que en este caso pueda aplicarse la regla concerniente a las detenciones inmediatamente después de que aquella se haya cometido, pues el artículo 16 se refiere a las detenciones en flagrancia únicamente en los casos de hechos preliminarmente considerados como delictivos, sin que bajo ningún supuesto las faltas administrativas previstas y sancionadas en los reglamentos de policía y buen gobierno importen la consumación de un ilícito criminal.

85. En cuanto a que se incumplieron estas exigencias, cabe concluir que la detención de **Q1** y **Q2** realizada al filo de las veintiuna horas del día 25 de enero de 2020 por los elementos **JAIME ALFONSO MARENTES MARENTES, LUIS AGUILAR CERVANTES** y **MARÍO REYES VÁSQUEZ** fue ilegal y, por tanto, violó en su perjuicio los derechos fundamentales a la legalidad y seguridad jurídica, en relación a no ser objeto de detención arbitraria.

- **La actuación del Juez Calificador**

86. El segundo momento cronológico del que debe ocuparse la Comisión, tiene que ver con la actuación de **JUAN FRANCISCO JAVIER DUARTE MARTÍNEZ,** en su calidad de Juez Calificador del municipio de Loreto que recibió la consignación de los quejosos una vez detenidos.

87. Para mensurar la corrección de la actuación de esta segunda parte de los hechos analizados en la queja, la Comisión estima pertinente referir que, con base en el parte 689 rendido por el Director de Seguridad Pública del Municipio de Loreto, se desprende que los elementos que participaron en el arresto de los quejosos los pusieron a disposición del Juez Calificador una vez que fueron trasladados a las instalaciones de la Policía Municipal. Según el propio documento **Q1** y **Q2** quedaron arrestados en los separos preventivos "por incurrir en el Artículo 20 Fracciones I, II y XXIII de la Ley de Justicia Comunitaria vigente en el Estado de Zacatecas. Solo en lo que interesa para esta parte de la relación de hechos conviene tener presente que **Q1** refirió que estando en la comandancia tanto a él como a su pareja los

> "(…) meten a los dos a separos preventivos, les pregunto porque detienen a mi pareja y me dicen que porque mi ex pareja nos está denunciando a los dos de que la queríamos golpear y quitarle a los niños, pero esto no es verdad, y en separos permanecimos como una hora y salimos pagando una multa de 800.00 pesos, y aclaro que por mi pareja no cobraron multa, solo por mí".

88. Mientras que al rendir su declaración y formular la queja respectiva **Q2** refirió que:

> "(…) estando en la comandancia me metieron a la comandancia y me revisaron me quitaron el celular y Q1 le quitaron las cintas y sus pertenencias y a mí me metieron en una celda y a Q1en otra y Q1les decía porque a ella la detienen pues si ella no hizo nada ni yo hice nada porque estamos aquí, y los policías decían que porque habíamos idos agredir a la ex esposa, pero no la agredimos yo ni me baje de la camioneta, y Q1solo quería ver a sus hijos, y estuvimos detenidos como una hora y media ya que llegó la mamá de Q1y pago una multa de $800.00 pesos, por Q1y un Policía dijo que a mí me dejaran ir porque no había hecho nada y otro dijo está bien la vamos a dejar en libertad y salimos en libertad los dos."

89. Además de las declaraciones de los policías captores y del informe del Presidente Municipal de Loreto que ya han sido referidos en términos semejantes, este relato queda corroborado por el oficio […] de fecha 3 de mayo de 2020, el Juez Calificador remitió su informe en relación con los hechos materia de la queja. En dicha comunicación, la autoridad mencionada, sostuvo que el día 25 de enero a las 21:15 horas se recibió una llamada telefónica

a la Dirección de Seguridad Pública por parte de la **T1** que su expareja el **Q1** y **Q2** se

> "(…) presentaron ante ella en completo estado de ebriedad e intentaban llevarse por la fuerza a sus 2 hijos, por lo que de inmediato reportó al departamento de policía. Cabe mencionar que el C. **Q1**tiene antecedentes de violencia familiar en la Procuraduría de protección de niñas, niños y adolescentes del SMDIF de Loreto Zacatecas, al igual se le han aplicado medidas de restricción o alejamiento. Fueron sancionados con fundamento en el artículo 20 fracciones I, II, XVI y XXIII de la ley de justicia comunitaria con el cobro de $ 800.00 (sic)".

90. Es importante mencionar que tanto del parte de puesta a disposición con folio 689 (que es la única constancia que se remite como complemento del informe rendido por el Juez Calificador) así como del propio oficio […] de fecha 3 de mayo de 2020, se sigue que las disposiciones donde se justificó el arresto de los quejosos fueron diversas disposiciones de la Ley de Justicia Comunitaria del Estado. En especial se invoca:

> **Artículo 20.** Son infracciones comunitarias:
> I. Injuriar u ofender a cualquier persona con palabras o movimientos corporales;
> II. Escandalizar o producir ruidos por cualquier medio que notoriamente atenten contra la tranquilidad o la salud de las personas;
> […]
> XVI. Ingerir bebidas alcohólicas en lugares públicos no autorizados;
> XXIII. Las demás acciones u omisiones análogas contempladas en otros ordenamientos.

91. Por lo tanto, con base en todo lo expuesto, se coligen los siguientes hechos probados en relación con los sucesos ocurridos en la Dirección de Seguridad Pública de Loreto:

- ***i.*** Los quejosos **Q1** y **Q2** fueron internados en los separos preventivos de la policía de Loreto, con posterioridad a que habían sido detenidos.
- ***ii.*** La causa del arresto se pretendió fundamentar en lo dispuesto por las fracciones I, II, XVI y XXIII de la Ley de Justicia Comunitaria del Estado.
- ***iii.*** El Juez Calificador **JUAN FRANCISCO JAVIER DUARTE MARTÍNEZ** impuso una sanción pecuniaria a **Q1**que ascendió a la cantidad de ochocientos pesos.
- ***iv.*** Los quejosos **Q1** y **Q2** fueron puestos en libertad una vez que se pagó –por la soltura del primero– la cantidad fijada como sanción por parte del Juez Calificador.
- ***v.*** El Juez Calificador no remite –no obra en el expediente– elemento de convicción que permita conocer las causas que tomó en consideración para tener por acreditadas las conductas atribuidas a los quejosos ni los elementos para individualizar la sanción pecuniaria en tal cuantía.

92. En vista de estas consideraciones, se estima que **JUAN FRANCISCO JAVIER DUARTE MARTÍNEZ,** en su calidad de Juez Calificador, vulneró en perjuicio de **Q1** y **Q2**, los derechos a la legalidad y seguridad jurídica, en concatenación con el derecho a no ser objeto de detenciones arbitrarias. Esto se apreciará de mejor manera si se desglosa cada una de las tres partes donde se advierten efectos en la actuación de esta autoridad.

- ❖ *La actuación del Juez Calificador como parte de una detención arbitraria*

93. Como se adelantó en las consideraciones precedentes, los quejosos fueron objeto de un arresto arbitrario por parte de los elementos de la policía municipal. Está demostrado que el único sustento de la afectación a sus derechos se hizo consistir en la voluntad del comandante de los elementos que ordenó la captura de los quejosos. Sin embargo, como se ha destacado también, la mecánica de las detenciones contrarias al bloque de constitucionalidad suele prolongarse en el tiempo, en cuanto que se trata de actos de tracto sucesivo donde incluso pueden participar diversas autoridades. Por lo tanto, en este caso, cabe concluir que el Juez Calificador también fue partícipe de la detención arbitraria al ser parte de los hechos, al no haber puesto fin a la detención arbitraria cuando los quejosos le fueron puestos a su disposición.

94. En efecto, el Juez Calificador estuvo en condiciones de advertir que en la especie se actualizaba una detención arbitraria que debía hacer cesar, sin que haya empleado ningún

mecanismo jurídico a su alcance para lograr ese fin. Las constancias que integran el expediente demuestran que cuando los quejosos le fueron puestos a disposición, el único elemento que obraba para adjudicarles la comisión de una falta era el parte con folio 689 rendido por los elementos captores. Con base en esa constancia y apoyado en los conocimientos jurídicos que tiene en Juez Calificador con motivo de su profesión y el desempeño de sus funciones, debió haber advertido que en el caso no existía ninguna causa legal para haber ordenado la captura. Puede ser que los quejosos hayan escandalizado en el salón de eventos y puede ser, además, que hayan incurrido en alguna falta adicional; sin embargo, esos hechos no les constaron directamente a los elementos captores y, por tanto, el mismo vicio le era predicable al Juez Municipal. Lo que faltó en el momento de la detención bajo ningún supuesto podría haber sido suplido por la autoridad de la justicia de barandilla. Al haber estado en condiciones de advertir y poner fin a la detención arbitraria sin haberlo hecho, la conducta del Juez Calificador debe estimarse como parte integrante de la cadena de hechos históricos demostrados en los cuales se sustentó un acto de molestia sin ningún fundamento para los quejosos.

95. De nueva cuenta es preciso reiterar que la sola existencia de conductas disvaliosas no es razón suficiente para afectar los derechos de las personas cuando tales hechos no están debidamente probados o, incluso, habiendo existido se ha consumado la oportunidad para su sanción. En su informe el Juez Calificador sostiene que los quejosos se presentaron ante la **T1** en completo estado de ebriedad, pero en el expediente no hay ningún elemento que compruebe esta situación, ni tampoco en el parte de consignación existe elemento alguno para demostrar la comisión de alguna otra falta, ni mucho menos que existiera oportunidad legal para detener a los quejosos.

96. Por tanto, a juicio de esta Comisión, en lo que hace a este primer aspecto, la actuación del Juez Calificador debe reputarse como parte integral de la detención arbitraria ya que el único sentido de actuación que podría colocar a esta parte de los hechos bajo examen fuera de la máxima calificación de ilicitud, habría implicado que el Juez Calificador por medio de alguno de los mecanismos a su alcance hubiera puesto fin a la situación arbitraria de manera inmediata una vez que la situación de los quejosos quedó bajo su potestad. Sin embargo, al no hacerlo así, su participación en los hechos pasó a formar parte de la configuración integral de la detención arbitraria.

- ***La actuación del Juez Calificador como manifestación de la arbitrariedad en la imposición de las sanciones y la determinación de la situación jurídica***

97. Existe un segundo sentido en el que se puede advertir la arbitrariedad de la actuación del Juez Calificador: se trata del momento en el que impuso sanciones pecuniarias al quejoso **Q1**, en general, omitió definir con certeza la situación jurídica de las dos personas consignadas.

98. Para comenzar, la Comisión destaca que la arbitrariedad no solo es un vicio propio de las detenciones o arrestos, sino que bajo ciertos aspectos se conforma como un defecto de cualquier aplicación del derecho sin alguna base sólida de sustentación. En este sentido, el defecto se vincula con el principio de interdicción de la arbitrariedad. Dicho principio sostiene que no pueden tolerarse ni producir efectos los actos que no son adecuados a la legalidad y ello, tanto si se trata de actividad reglada —infracción de la norma— como de actividad discrecional —desviación de poder—. Este principio, se refiere a todos los poderes públicos y, al hacerlo así, introduce un arma revisora en manos de los tribunales ordinarios, de la jurisdicción constitucional y, en nuestro caso, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Cuando se habla de la arbitrariedad en la aplicación del derecho se está en presencia de actos que imponen molestias o privan al gobernado de ciertos bienes bajo la sola voluntad o capricho del funcionario del cual emanan los actos desviados, por ello comportan una máxima violación a la garantía de legalidad, en cuanto que no existe fundamento alguno para la determinación del sentido de afectación deparado a la esfera jurídica del gobernado.

99. Así las cosas, según se ha referido con antelación, en cuanto la imposición de sanciones como consecuencia de la comisión de una falta administrativa, participa de la naturaleza coactiva de la represión estatal, entonces a estas manifestaciones del poder de imperio de la

autoridad le son aplicables las garantías contenidas en los artículos 14, 21, 22 y 23 de la Constitución. En particular, a tenor de las reglas (5) a (7) analizadas más arriba, se desprende que la imposición de sanciones por parte de autoridades administrativas solo se justifica cunado tales sanciones se apoyen en un precepto de carácter general y las autoridades comprueben fehacientemente la existencia del hecho o hechos en que se haga consistir la falta, es decir, de los hechos que determinen la aplicación de la norma en el caso concreto. Cuando no cumplen con tales requisitos, violan las garantías consignadas en el artículo 16 constitucional, por falta de motivación debida de sus actos. Así, en el caso no solamente una norma general –de carácter reglamentario o legal– debería prever la sanción aplicable, sino que –por encima de ello– la conducta debería estar perfectamente acreditada. Y esto fue precisamente lo que faltó en la especie.

100. En efecto, el único elemento de convicción de que se sirvió el Juez Calificador para imponer la sanción fue el parte de consignación remitido por los elementos que participaron en el arresto. Pero en ese documento solo se hace una referencia vaga a que la expareja de **Q1**señaló que él y otra mujer se querían llevar a sus hijos. Después de eso el parte presenta una elipsis temporal y retoma la narración hasta la lectura de derechos a los detenidos. Nada se dice sobre si los elementos de policía percibieron directamente los hechos y, mucho menos se refiere que los quejosos, se hayan encontrado en estado de ebriedad. Por lo tanto, a todas luces se advierte que el Juez Calificador impuso a los quejosos una sanción por una conducta que no estaba probada, es más, para la que existían elementos de convicción insuficientes de manera insalvable.

101. Es verdad que en el parte se citan diversas disposiciones de la Ley de Justicia Comunitaria del Estado, algunas de las cuales se identificaron desde el parte de consignación. Sin embargo, ello no es apto para justificar la imposición de la sanción, en principio porque no se identifica de qué forma cada extremo de la conducta de los quejosos colmó cada una de las fracciones aludidas. Como se ha visto, puede ser que la ley sancione las conductas consistentes en injuriar u ofender a cualquier persona con palabras o movimientos corporales, escandalizar o producir ruidos por cualquier medio que notoriamente atenten contra la tranquilidad o la salud de las personas; o ingerir bebidas alcohólicas en lugares públicos no autorizados. Sin embargo, la manifestación coactiva de la autoridad municipal debió de señalar la forma precisa en que se cometió cada una de ellas. Podría ser que los quejosos hayan incurrido en todas esas conductas, pero para poder sancionarlos cada una de ellas debía estar probada más allá de toda duda razonable. El caso es que con las pruebas que obran en el expediente y que fueron remitidas por la autoridad, ninguna de esas conductas podía quedar probada.

102. Para mayor inri hay que recordar que los propios elementos captores refieren que cuando detuvieron a los quejosos estos ya no se encontraban haciendo nada y que, además, los hechos aparentemente atribuidos a los quejosos no les constaban directamente porque cuando llegaron al salón de eventos **Q1** y **Q2** ya se habían retirado del lugar. En vista de ello, es claro que la actuación del Juez Calificador fue contraria a lo dispuesto por el artículo 16 constitucional.

103. Conforme a este numeral de la ley suprema, la sanción impuesta a los quejosos tenía que haberse expresado por escrito y contenga la firma original o autógrafa del respectivo funcionario; provenir de una autoridad competente; y estar fundada y motivada. La primera de estas exigencias tiene como propósito evidente que pueda haber certeza sobre la existencia del acto de molestia y para que el afectado pueda conocer con precisión de cuál autoridad proviene, así como su contenido y sus consecuencias. Asimismo, que el acto de autoridad provenga de una autoridad competente significa que la emisora esté habilitada constitucional o legalmente y tenga dentro de sus atribuciones la facultad de emitirlo. Y la exigencia de fundamentación es entendida como el deber que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer el acto de autoridad, presupuesto que tiene su origen en el principio de legalidad que en su aspecto imperativo consiste en que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite; mientras que la exigencia de motivación se traduce en la expresión de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma. Sin

embargo, en el presente caso no obra constancia escrita de la imposición de la sanción; es decir, de la resolución determinante del crédito a cargo de las personas arrestadas ni tampoco de que la autoridad haya reunido algún elemento de juicio indispensable para individualizar la sanción económica impuesta. En breve, los quejosos fueron sometidos a un acto de molestia –el arresto– y a un acto privativo –la imposición de la multa– que no estuvieron emitidos por escrito –tan es así que no hay prueba de la resolución determinante de la detención y del crédito fiscal– y que no estuvieron fundados y motivados.

104. Por último, en este campo la Comisión censura las manifestaciones que el Juez Calificador vierte en su informe en el sentido de que el quejoso **Q1**cuenta con antecedentes de violencia familiar o ha sido objeto de medidas de apremio por parte de otras autoridades para preservar el orden familiar con sus hijos o parejas, pues ello en nada abona al esclarecimiento de los hechos ni aporta ninguna claridad justificativa para la imposición de las sanciones al quejoso. La Comisión recuerda que se sanciona por los hechos cometidos, no por el historial o los antecedentes de las personas, ya que de lo contrario se sancionaría con base en un sistema de derecho administrativo de autor y no a un derecho administrativo sancionador de acto.

105. Por otro lado, la actuación del Juez Calificador fue todavía más irregular –si en este sentido puede hablarse de grados– en el caso de la situación jurídica de **Q2.** En efecto, la quejosa fue arrestada por decirlo así "en vía de consecuencia", es decir, por una orden del comandante de la policía **MARIO REYES VÁSQUEZ**, sin embargo, cuando fue consignada ante la autoridad no obra ningún elemento de convicción de que se haya tomado determinación alguna en torno a la legalidad del arresto, o que se le haya determinado la imposición de sanción alguna, tan es así que cuando se pagó la sanción impuesta a **Q1**también se le dejó en libertad a la quejosa. Esta suma de desaciertos evidencia, una vez más, que el Juez **JUAN FRANCISCO JAVIER DUARTE MARTÍNEZ** vulneró el principio de legalidad y seguridad jurídica en un grado predominante o superior en contra de la quejosa **Q2.**

106. Así las cosas, también en la actuación del Juez Calificador se advirtieron y quedaron demostradas violaciones a los derechos fundamentales de los quejosos. Estas vulneraciones consistieron en lo particular, en haber validado de manera arbitraria el arresto de que habían sido objeto los quejosos; y luego, en haber desconocido las seguridades constitucionales derivadas de la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 constitucional para la imposición de una sanción como consecuencia de la acreditación de una falta administrativa.

- ***La actuación del Juez Calificador como contraria a las reglas mínimas para el tratamiento de las personas privadas de la libertad***

107. Finalmente, existe una última omisión en la actuación del Juez Calificador que incidió sobre una afectación al principio de seguridad personal de los quejosos y que implicó una violación al principio de legalidad por la omisión de la autoridad municipal, la cual, estando obligada a una conducta de hacer, dejo de accionar como se esperaba de ella. En este caso, el parámetro para la calificación de la conducta son las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en 1955, y aprobadas por el Consejo Económico y Social en sus resoluciones 663C (XXIV) de 31 de julio de 1957 y 2076 (LXII) de 13 de mayo de 1977. Si bien estas reglas parecerían aplicar solamente para las privaciones de la libertad derivadas de procedimientos penales, en la definición de su ámbito de aplicación se destaca que "la primera parte de las reglas trata de las concernientes a la administración general de los establecimientos penitenciarios y es aplicable a todas las categorías de reclusos, criminales o civiles, en prisión preventiva o condenados, incluso a los que sean objeto de una medida de seguridad o de una medida de reeducación ordenada por el juez".

108. Así las cosas, en el primer apartado de las reglas de la sección general, se contiene la disposición 22.1 según la cual "todo establecimiento penitenciario dispondrá por lo menos de los servicios de un médico calificado que deberá poseer algunos conocimientos psiquiátricos. Los servicios médicos deberán organizarse íntimamente vinculados con la administración

general del servicio sanitario de la comunidad o de la nación. Deberán comprender un servicio psiquiátrico para el diagnóstico y, si fuere necesario, para el tratamiento de los casos de enfermedades mentales". Por tanto, la regla 24 determina, en consonancia con lo expuesto, que "el médico deberá examinar a cada recluso tan pronto sea posible después de su ingreso y ulteriormente tan a menudo como sea necesario, en particular para determinar la existencia de una enfermedad física o mental, tomar en su caso las medidas necesarias; asegurar el aislamiento de los reclusos sospechosos de sufrir enfermedades infecciosas o contagiosas; señalar las deficiencias físicas y mentales que puedan constituir un obstáculo para la readaptación, y determinar la capacidad física de cada recluso para el trabajo".

109. Con base en lo señalado en estas dos reglas, el Juez Calificador debió ordenar, tan pronto como le fueron puestos a disposición los quejosos que se les practicarán los exámenes necesarios a fin de certificar la integridad física de los consignados e, incluso, con base en los resultados obtenidos, cerciorarse si alguno de los quejosos (o ambos) se encontraban en estado de ebriedad. Este procedimiento ordenado por el derecho aplicable según la Organización de las Naciones Unidas y su Consejo Económico y Social, son un medio adecuado para preservar la seguridad e integridad personal de los sujetos sometidos a alguna clase de reclusión sea por razón de la comisión de un delito o la imposición de una sanción administrativa.

110. En el caso concreto, estas normas disciplinaban la actuación del Juez Calificador una vez que recibió la consignación de los detenidos. Esto es, en aplicación del imperativo de legalidad debió haber actuado en forma oportuna para lograr la certificación del estado de salud de los quejosos al momento de la detención, empero no lo hizo y con ello concretó, una vez más, un comportamiento que se aparta del imperativo de legalidad y que se tradujo en una afectación a sus derechos humanos.

VII. CONCLUSIONES DEL CASO

1. Con base en las pruebas recabadas durante la fase de integración del expediente en que se actúa y que fueron referidas en los apartados anteriores, esta Comisión documentó la existencia de actos violatorios de los derechos fundamentales de **Q1** y **Q2**, especialmente de aquellos relacionados con el derecho a la legalidad y seguridad jurídica, al haber sido víctimas de un arresto arbitrario a manos de los elementos integrantes de la policía municipal de Loreto **JAIME ALFONSO MARENTES MARENTES, LUIS AGUILAR CERVANTES** y **MARÍO REYES VÁSQUEZ** quienes –respectivamente– detuvieron y retuvieron al quejoso sin sujetarse a las reglas, condiciones y requisitos que establece el bloque de constitucionalidad para las detenciones efectuadas en casos de faltas administrativas.

2. Además de que la detención se realizó violentado la seguridad jurídica de los quejosos, al no colmarse ningún supuesto de flagrancia, por lo tanto, los quejosos **Q1**y **Q2** sufrieron afectaciones injustificadas, en virtud de que fueron mantenidos en los separos de la policía municipal a pesar de que no se acreditó según las mismas constancias que tuvo a la vista el Juez Calificador, la actualización de ninguna falta.

3. Por último, el quejoso **Q1** fue violentado en su garantía de legalidad al haber sido objeto de la imposición de una sanción económica por la presunta comisión de una falta que no estaba demostrada, mediante un acto de autoridad emitido por el Juez Calificador **JUAN FRANCISCO JAVIER DUARTE MARTÍNEZ** sin que tal determinación constara por escrito y estuviera debidamente fundada y motivada.

VIII. DETERMINACIÓN DE LAS VÍCTIMAS DEL CASO

1. Tal como lo ha hecho la Comisión en una larga serie de precedentes, en este acto procederá a determinar quiénes son las víctimas del caso. En relación con dicha determinación bien puede echarse mano de las nociones perfiladas por la CoIDH a lo largo de su jurisprudencia. Según el tribunal regional, la noción de "víctima" bajo derecho internacional refiere a la parte lesionada. Así, de conformidad con reglas generales de la responsabilidad internacional de los

Estados a causa de violaciones iusfundamentales, la parte lesionada es aquella “cuyo derecho individual ha sido denegado o dañado por el acto ilegal internacional o que ha sido de otra manera particularmente afectado por dicho acto”.

2. En concreto, dentro del área de la protección internacional de derechos fundamentales, la parte lesionada es el individuo cuyos derechos han sido violados; es decir, la parte cuyos derechos han sido conculcados generándosele un daño, de ahí que con frecuencia también se le refiere como la “parte agraviada”. En el mismo sentido, el Reglamento de la CoIDH define el término “víctima” como equivalente a “la persona cuyos derechos han sido violados de acuerdo a la sentencia proferida por la Corte”. Por lo cual, “víctima” es aquella persona cuyos derechos ya han sido determinados por el colegio jurisdiccional interamericano al establecer la actualización de violaciones en su detrimento.

3. Sin embargo, el elenco de personas amparadas bajo la noción de “victimas” ha descrito una expansión a la luz de la propia jurisprudencia interamericana. En efecto, por razón de su carácter como personas especialmente vinculadas con los titulares de los derechos menoscabados, la CoIDH ha extendido el reconocimiento de la condición de “víctima” a personas que en su jurisprudencia inicial no eran consideradas como tales. Este es el caso, por ejemplo, de los familiares de menores asesinados.[51] En este asunto contencioso conocido como “Niños de la Calle” contra el Estado guatemalteco, la CoIDH reconoció que los familiares de los menores torturados y asesinados también habían sufrido en sí mismas violaciones del artículo 5 de la Convención. Para decirlo con las propias palabras empleadas en aquella resolución interamericana:

> La Corte debe destacar entre las conductas de los agentes estatales que intervinieron en los hechos del caso y que produjeron un impacto sobre sus familiares, la correspondiente al tratamiento que se dio a los cuerpos de los jóvenes cuyos cadáveres aparecieron en los Bosques de San Nicolás, […]. Estas personas no sólo fueron víctimas de la violencia extrema correspondiente a su eliminación física, sino que, además, sus cuerpos fueron abandonados en un paraje deshabitado, quedaron expuestos a las inclemencias del tiempo y a la acción de los animales y hubieran podido permanecer así durante varios días, si no hubieran sido encontrados fortuitamente. En el presente caso, es evidente que el tratamiento que se dio a los restos de las víctimas, que eran sagrados para sus deudos, y en particular, para sus madres, constituyó para éstas un trato cruel e inhumano.[52]

4. Por lo dicho, no solo las personas directamente titulares de los derechos conculcados por la acción u omisión de las autoridades deben calificarse como víctimas directas de la violación, sino que dicha legitimación se decanta también hacia las personas que guardan con las primeras una relación especialmente cercana y de afecto, como puede ser el vínculo de parentesco en razón del cual ellas también resienten una afectación que debe ser reparada por la resolución que eventualmente llegara a dictarse ya sea en la sede interna o en los canales internacionales de protección de los derechos.

5. En el orden interno el artículo 4º de la Ley General de Víctimas se refiere también a dos clases dentro de esta categoría. Según este numeral, son víctimas directas aquellas personas físicas que hayan sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional, o en general cualquiera puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte”. En cambio, los párrafos segundo y tercero del mismo numeral califican como víctimas indirectas a “los familiares o aquellas personas físicas a cargo de la víctima directa que tengan una relación inmediata con ella. Para este efecto se consideran víctimas indirectas, entre otros, al cónyuge, la concubina o el concubinario, a las hijas e hijos, a los padres o los dependientes económicos” de una víctima directa.

6. Con base en lo dicho, esta Comisión confiere el carácter de víctimas directas de las violaciones de derechos fundamentales calificadas en la especie a **Q1**y **Q2** en cuanto ellos son titulares de los derechos cuya vulneración se ha demostrado.

---

51 Cfr. *Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala*. Sentencia de 19 de noviembre 1999, párrafo 171.

52 *Ibidem*, párrafo 174.

7. En el caso no se advierte la existencia de ninguna víctima indirecta respecto de la cual deba hacerse un pronunciamiento especial.

IX. REPARACIONES.

1. De conformidad con lo establecido por el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 51 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, a haberse acreditado una violación a los derechos humanos del quejoso, la presente recomendación, debe incluir las medidas que procedan para lograr la efectiva restitución de las personas afectadas en sus derechos.

2. En este sentido debe recordarse que uno de los pilares del Estado de Derecho consiste en la garantía otorgada a las personas para que en caso de ser objeto de violación a sus derechos fundamentales, puedan reclamar que los responsables de dicha vulneración sean sancionados. Ello es así desde el momento en que el Estado asume una posición de garante de sus derechos. Como lo explica un precedente de la SCJN:

> Las víctimas de violación a los derechos humanos o sus familiares, tienen derecho a la reparación adecuada del daño sufrido. Lo cual debe concretarse a través de medidas individuales tendientes a restituir, indemnizar y rehabilitar a la víctima, así como de medidas de satisfacción de alcance general y garantías de no repetición, mediante los procedimientos previstos legalmente para esos efectos, lo cual no es una concesión graciosa, sino el cumplimiento de una obligación jurídica. Lo anterior deriva tanto del régimen previsto constitucionalmente como de los instrumentos internacionales ratificados por México y de los criterios de organismos internacionales, los cuales se manifiestan claramente en el sentido de que es un derecho efectivo de las personas agraviadas a nivel fundamental obtener una reparación proporcional a la gravedad de las violaciones y al daño sufrido.[53]

3. Así las cosas, conforme a los Principios y Directrices Básicos sobre el Derecho de las Víctimas de Violaciones Manifiestas de las Normas Internacionales de Derechos humanos y de Violaciones Graves del Derecho Internacional Humanitario a Interponer Recursos y Obtener Reparaciones, adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 2005, las violaciones de derechos humanos deben contemplar, de forma apropiada y proporcional a la gravedad de ésta, una reparación plena y efectiva en las formas siguientes: restitución, rehabilitación, satisfacción, indemnización, deber de investigar y garantías de no repetición.

4. En el ámbito interamericano el artículo 63.1 del Pacto de San José establece que cuando decida que hubo violación a un derecho o libertad protegidos en la Convención, la CoIDH dispondrá se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Asimismo, se dispondrá, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que se ha configurado la violación a estos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada. Sobre esa base, la CoIDH ha considerado que “las reparaciones, como el término lo indica, consisten en las medidas que tienden a hacer desaparecer los efectos de las violaciones cometidas. Su naturaleza y su monto dependen del daño ocasionado en los planos tanto material como inmaterial”.[54] Así las cosas, el doble alcance de la norma reparatoria, ha dado lugar a una arquitectura restitutoria que tiene como objetivos no solo borrar las huellas que en la víctima produjo el actuar del Estado, sino también evitar que ese tipo de hechos se vuelvan a repetir.

5. Las reparaciones derivadas de violaciones a derechos fundamentales también se contemplan en la Ley General de Víctimas. En especial, se pueden citar a este respecto los artículos 1º, último párrafo, 7º, fracciones I y II; y, particularmente, el artículo 26, según el cual “las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera oportuna, plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva por el daño que han sufrido como consecuencia del delito o hecho victimizante que las ha afectado o de las violaciones de derechos humanos que han sufrido, comprendiendo medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y medidas de no repetición”.

---

53 Véase: *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, 9ª época, tomo XXXIII, enero de 2011, p. 28

54 Cfr. *Caso Acevedo Jaramillo y otros Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas*. Sentencia de 7 de febrero de 2006. Serie C No. 144, párrafo 175.

6. Finalmente, el artículo 51 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, dispone que, al acreditarse una violación a los derechos humanos atribuible a un servidor público estatal, la resolución formulada al respecto debe incluir las medidas que procedan para lograr la efectiva restitución de las personas afectadas en sus derechos.

7. Por lo tanto, en atención de las consideraciones vertidas a lo largo de este apartado, la Comisión estima pertinente fijar las siguientes bases para la reparación del daño acaecido como consecuencia de las violaciones de derechos acreditadas en el caso.

a) De las medidas de indemnización

1. La indemnización ha sido reconocida como una medida que tiende a compensar a las víctimas por afectaciones materiales sufridas con motivo de la falta que ha cometido el Estado en su perjuicio, entre ellos, el daño emergente, el lucro cesante y el daño moral sufrido por la agraviada, todo lo cual no puede implicar ni un empobrecimiento ni un enriquecimiento para la víctima o sus sucesores.[55] Por lo tanto, esta medida reparatoria ha de concederse, de forma apropiada y proporcional a la gravedad de la violación y a las circunstancias de cada caso, por todos los perjuicios económicamente evaluables que sean consecuencia de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos o de violaciones graves del derecho internacional humanitario, tales como: a) El daño físico o mental; b) La pérdida de oportunidades, en particular las de empleo, educación y prestaciones sociales; c) Los daños materiales y la pérdida de ingresos, incluido el lucro cesante; d) Los perjuicios morales; e) Los gastos de asistencia jurídica o de expertos, medicamentos y servicios médicos y servicios psicológicos y sociales.

2. En consecuencia, en este caso, se deberán reparar los daños materiales que se ocasionaron a las víctimas directas reconocidas en esta recomendación como consecuencia directa e inmediata del arresto arbitrario de que fueron objeto **Q1** y **Q2** el 25 de enero de 2020.

b) De las medidas de rehabilitación.

1. La rehabilitación pretende facilitar a la víctima la superación de los efectos sufridos por causa de las violaciones de derechos fundamentales de que fue objeto. En consecuencia, como parte del cumplimiento de la presente recomendación es necesario que, en cumplimiento a las obligaciones establecidas en la Ley General de Víctimas y en la Ley de Atención a Víctimas del Estado de Zacatecas, se otorguen a la parte agraviada los servicios de atención psicológica especializados que esta requiera en lo individual. Dichos servicios deberán ser proveídos de acuerdo con los estándares aplicables de la jurisprudencia internacional de los derechos humanos.

2. Por lo tanto, se deberá garantizar a los quejosos **Q1** y **Q2** la atención psicológica oportuna, que pudieran requerir con motivo de la violación de los derechos humanos señalados. Por lo demás, esta atención deberá otorgarse en condiciones de absoluta discreción y con todos los requerimientos para que los quejosos superen las eventuales afectaciones que pudieran llegar a presentar con motivo de la violación a sus derechos.

c) De las medidas de satisfacción.

1. Según los Principios Sobre el Derecho a Obtener Reparaciones ya invocados, las medidas de satisfacción deben incluir, cuando sea oportuno, la totalidad o parte de las medidas siguientes: medidas eficaces para conseguir que no se continúe con las violaciones; así como la aplicación de sanciones judiciales o administrativas a los responsables de las violaciones a los derechos fundamentales declaradas.

2. Por lo tanto, el Presidente Municipal de Loreto, **C. FRANCISCO FIGUEROA GÓMEZ**, deberá emprender, por medio de las instancias municipales competentes, las siguientes medidas de satisfacción:

---

55 Así véase: *Caso Velázquez Rodríguez vs Honduras, Reparaciones y Costas*, Sentencia 21 de junio de 1989, Serie C, No. 7, párrafo 38; y *Caso Tinoco Estrada y otros vs Bolivia, Fondo, reparación y costas*. Sentencia 27 de noviembre de 2008 C, No. 211.

3. Iniciar un procedimiento de investigación, ante la Contraloría Municipal, para deslindar las responsabilidades administrativas o penales que pudieran corresponderles a **JAIME ALFONSO MARENTES MARENTES, LUIS AGUILAR CERVANTES** y **MARÍO REYES VÁSQUEZ,** en sus calidades de elementos de la Policía Municipal de Loreto, con motivo del arresto arbitrario de que fueron objeto los quejosos el 25 de enero de 2020; y de **JUAN FRANCISCO JAVIER DUARTE MARTÍNEZ**, en su carácter de Juez Calificador de Loreto, por la inexacta calificación de las sanciones impuestas al quejoso **Q1**, remitiendo a esta Comisión las constancias que acrediten el cumplimiento de las medidas de satisfacción en los plazos señalados.

d) De las garantías de no repetición.

1. Las garantías de no repetición son aquéllas que se adoptan con el fin de evitar que las víctimas vuelvan a hacer objeto de violaciones a sus derechos humanos y para contribuir a prevenir o evitar la repetición de actos de su misma naturaleza.

2. Finalmente, con ese propósito, resulta indispensable que el Presidente Municipal de Loreto, **C. FRANCISCO FIGUEROA GÓMEZ**, a través de las instancias municipales correspondientes, trabaje de manera coordinada y permanente en la capacitación jurídica del personal de la policía preventiva a fin de que, desde una perspectiva fundada en los estándares del bloque de constitucionalidad y la jurisprudencia emanada del Poder Judicial de la Federación y la CoIDH, se reduzca la incidencia de violaciones a los derechos de libertad personal y seguridad jurídica, perpetrados con motivo de la detención ilegal y arbitraria de personas, especialmente en los casos de arrestos administrativos.

X. RECOMENDACIONES.

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 1º y 102 apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 2º, 3º, 4º, 8º, 17, 37, 51, 53, 54, 56, 57 y 58 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado se emiten las siguientes recomendaciones dirigidas al **Presidente Municipal de Loreto, C. FRANCISCO FIGUEROA GÓMEZ.**

PRIMERA. Dentro de un plazo máximo de un mes, contado a partir de la notificación de la presente Recomendación, se inscriba en el Registro Estatal de Víctimas, a los **CC. Q1** y a **Q2,** en calidad de víctimas directas de violaciones a sus derechos humanos, por parte de los elementos de la Dirección de Seguridad Pública del municipio de Loreto, así como del Juez Calificador de Loreto, Zacatecas, a fin de que se garantice su acceso oportuno al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, previsto en la Ley de Atención a Víctimas del Estado de Zacatecas, conforme al contenido del apartado IX de esta Recomendación, debiendo remitir a este Organismo las constancias que acrediten su cumplimiento.

SEGUNDA. Dentro de un plazo máximo de un mes, contado a partir de la aceptación de la presente Recomendación, se inicien los procedimientos administrativos de responsabilidad, en contra de los **CC. JAIME ALFONSO MARENTES MARENTES, LUIS AGUILAR CERVANTES** y **MARÍO REYES VÁSQUEZ,** en sus calidades de elementos de la Policía Municipal de Loreto, con motivo del arresto arbitrario de que fueron objeto los quejosos el 25 de enero de 2020; y de **JUAN FRANCISCO JAVIER DUARTE MARTÍNEZ**, en su carácter de Juez Calificador de Loreto, por la inexacta calificación de las sanciones impuestas al quejoso **Q1**, hechos motivo de la presente Recomendación.

TERCERA. Dentro de un plazo de tres meses, contados a partir de aceptación de la presente Resolución, se capacite a elementos Preventivos de la Dirección de Seguridad Pública del municipio de Loreto, Zacatecas, en temas relativos a la protección, respeto y garantía a los derechos humanos, sobre las formalidades que se deben de seguir con cualquier persona detenida, para que en lo sucesivo se conduzcan en su actuar laboral con apego y respeto a la

legalidad. Lo anterior en tanto que resulta relevante como medida de reparación, pues el acto ejecutado por dichas personas representa una conducta infractora de los derechos fundamentales.

CUARTA. Dentro de un plazo máximo de tres meses, contados a partir de la aceptación de la presente Recomendación, se deberá capacitar a los elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, en el derecho a la legalidad y seguridad jurídica, en relación a no ser objeto de detención arbitraria, y motivar y fundar todo acto de autoridad; así como en las disposiciones constitucionales y de la Ley de Justicia Comunitaria del Estado de Zacatecas, que regulan las condiciones en que deben realizarse las detenciones.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 53, párrafo segundo de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, se hace del conocimiento de la autoridad a la que va dirigida esta Recomendación, que dispone de un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente en que ésta se le notifique, para que manifieste si la acepta o no, en el entendido de que, de no aceptarla, su respuesta se hará del conocimiento de la opinión pública. En caso de que la acepte, se le notifica que dispone de un plazo de 15 días, contados a partir del vencimiento del término del que disponía para responder sobre la aceptación, a fin de enviar las pruebas de su cumplimiento.

Por último, hágasele saber a los familiares del finado, el resultado de la presente recomendación y de conformidad con el artículo 61 de la Ley de este Organismo, que dispone de 30 días naturales, computados a partir de la fecha de notificación del presente documento, para que en caso de que exista inconformidad con la misma, interponga el recurso de impugnación correspondiente ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Así lo determina y firma

DRA. EN D. MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOS
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE ZACATECAS

Expediente: CDHEZ/447/2019

Persona quejosa: Q1.

Persona agraviada: A1.

Autoridades responsables: Elementos de la Dirección de Seguridad Pública del municipio de Zacatecas.

Derechos humanos vulnerados:

I. Derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica, en relación con el derecho a no ser objeto de detención arbitraria.
II. Derecho a la integridad y seguridad personal, en su modalidad de derecho a la integridad física.

Zacatecas, Zac., a 01 de septiembre de 2021, una vez concluida la investigación de los hechos que motivaron el expediente **CDHEZ/447/2019**, y analizado el proyecto presentado por la Primera Visitaduría General, la suscrita aprobó, de conformidad con los artículos 4, 8, fracción VIII, 17 fracción V, 37, 51, 53 y 56 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, en relación con lo dispuesto por los numerales 161 fracción X, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 y 175 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, vigente al momento de los hechos, la **Recomendación 47/2021** que se dirige a la autoridad siguiente:

MTRO. SALVADOR ESTRADA GONZALEZ. Presidente Municipal de Zacatecas.

R E S U L T A N D O;

I. DE LA CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

1. De conformidad con los artículos 6º, apartado A., fracción II y 16, párrafo segundo, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 23 y 85 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, los datos personales, así como aquellos relativos a la vida privada y familiar, permanecerán confidenciales, ya que no tienen el carácter de públicos.

2. Asimismo, en términos de lo dispuesto por los artículos 4º párrafo sexto, 6º fracción II, y 16, párrafo segundo de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos, y 16 de la Convención Sobre los derechos del Niño, los nombres, apellidos y demás datos personales de niñas, y niños vinculados con los derechos de la presente resolución, se mantienen bajo la misma estricta confidencialidad, en pleno respeto a su derecho a la intimidad y vida privada.

II. RELATORÍA DE LOS HECHOS Y OBJETO DE LA CONTROVERSIA.

1. El 19 de septiembre de 2019, **Q1** presentó queja a favor de **A1**, en contra de elementos de la Dirección de Seguridad Pública del municipio de Zacatecas, por actos presuntamente violatorios de sus derechos humanos, de conformidad con los artículos 30, 31 y 32 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas.

Por razón de turno, el 20 de septiembre de 2019, se remitió el escrito de queja a la Primera Visitaduría, bajo el número de expediente citado al rubro, a efecto de formular el correspondiente acuerdo de calificación, de conformidad con lo dispuesto por los artículos

123 y 124 fracción I, del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, vigente al momento de los hechos.

El 23 de septiembre de 2019, la queja se calificó como una presunta violación al derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica, en relación a no ser objeto de detención arbitraria y al derecho a la integridad y seguridad personal, en relación al derecho a la integridad física, de conformidad con lo establecido por el artículo 124, fracción I, del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, vigente al momento de los hechos.

2. Los hechos materia de la queja consistieron en lo siguiente:
Q1 hizo consistir su queja en contra de elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Zacatecas, por la detención y agresión de que fue objeto su hermano **A1,** el 18 de septiembre de 2019, ya que refiere, éste se fue a un convivio con seis amigos en la colonia H. Ayuntamiento de Zacatecas, y alrededor de las 9 de la noche, por celular, le comunicó que lo andaban siguiendo, habiendo ido primero ella a buscarlo hacia esa colonia, observando mucho movimiento de patrullas de la Policía Preventiva Municipal, Ministerial y Metropolitana con rumbo a la colonia del ETE. Que posteriormente, llegó a donde ella se encontraba, su padre **T1,** a quien elementos de la Policía Metropolitana le esculcaron su taxi, diciéndole que les informaron que llevaba personas que tenían un reporte, que después también lo revisaron elementos de la Policía de Investigación. Asimismo, refirió que como a las once de la noche, recibió llamada telefónica de su tía **T2,** comunicando que su hermano se encontraba detenido y al parecer estaba golpeado. Motivo por el cual, acudió a las instalaciones de la Policía de Investigación, donde observó en la recepción a su hermano golpeado y afuera de la agencia estaba el señor **T3,** padre de **JUAN MANUEL REVILLA LÓPEZ,** que es elemento activo de la Policía Preventiva de esta ciudad, con quien su hermano tiene conflicto, el cual estaba con su hermano menor a quien aconsejaba en contra del hermano de la quejosa, porque según eso, le habían quitado la cantidad de 30.00 pesos (TREINTA PESOS 00/100 M.N.).

3. La autoridad involucrada, rindió el informe correspondiente:
   a) El 23 de octubre de 2019, se recibió el informe de autoridad, emitido por el **M.B.A ULISES MEJIA HARO,** otrora Presidente Municipal de Zacatecas.

III. COMPETENCIA.

1. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas es competente, en términos de los artículos 1º, 4º, 6º, 8º fracción VII, inciso A) y 31 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, en relación con los numerales 15, 22 y 23 de su Reglamento Interno, vigente al momento de los hechos, en razón de que la queja se promueve en contra de servidores públicos de esta entidad, por hechos ocurridos el 18 de septiembre de 2019.

2. De conformidad con los artículos 123 y 124 del Reglamento Interior de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, este Organismo advirtió que de los hechos se pudo presumir la violación de los derechos humanos de **A1**, así como la responsabilidad por parte de los elementos de la Dirección de Seguridad Pública del municipio de Zacatecas, que participaron en los hechos.

3. Esta Comisión presumió la violación de los siguientes derechos:
   a) Derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica, en relación con el derecho a no ser objeto de detención arbitraria.
   b) Derecho a la integridad y seguridad personal, en su modalidad del derecho a la integridad física.

IV. PROCEDIMIENTO ANTE LA COMISIÓN.

Con la finalidad de documentar las presuntas violaciones a derechos humanos, así como para determinar la existencia o no de responsabilidad por parte de los elementos de la Dirección de Seguridad Pública del municipio de Zacatecas, este Organismo realizó

entrevistas a las personas relacionadas con los hechos; se recabaron comparecencias de personal de la Dirección de Seguridad Pública del municipio de Zacatecas, así como de la Policía Metropolitana del Estado; se solicitaron informes a las autoridades señaladas como responsables, así como informes en vía de colaboración; se consultó certificado médico de lesiones del agraviado; se consultó la carpeta de investigación relacionada con los hechos y se realizó la investigación de campo correspondiente.

V. PRUEBAS.

Con base en lo estipulado en los artículos 48 y 49 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, en relación con los numerales 150, 151, 152, 153 y 154 del Reglamento Interior de este Organismo, vigente al momento de los hechos, durante el procedimiento realizado por esta Institución se recabaron los elementos probatorios documentales, remitidos tanto por la parte agraviada como por las autoridades señaladas como responsables necesarios para emitir la resolución correspondiente.

VI. SOBRE LOS DERECHOS VULNERADOS.

A) Derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica, en relación al derecho a no ser objeto de detención arbitraria.

1. El derecho a la seguridad jurídica otorga primacía al derecho a la legalidad, ya que, de conformidad con éste, todo acto de autoridad debe estar fundamentado en una ley, la cual debe estar armonizada con los derechos humanos reconocidos por nuestro país. De ahí que éstas sólo puedan hacer aquello para lo que estén facultados expresamente en la normatividad legal, a fin de brindar seguridad y certeza jurídica a las personas. Ya que así, se busca incidir sobre el poder público e impedir la arbitrariedad o discrecionalidad de las autoridades y personas que ejercen servicios públicos[1].

2. La interdependencia existente entre el derecho a la seguridad jurídica y a la legalidad es tal, que sus contenidos dan sentido a los contenidos de ambos. Así, mientras la seguridad jurídica nos permite conocer nuestros derechos y obligaciones de modo claro y preciso; el principio de legalidad requiere que todo acto destinado a producir efectos jurídicos debe tener como base una disposición y un procedimiento legal[2].

3. En el Sistema Universal de Derechos Humanos, el derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica se encuentra reconocido tanto en la Declaración Universal de Derechos Humanos[3], como en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos[4], al señalarse que ninguna persona puede ser objeto de injerencias arbitrarias en su vida, familia, derechos, posesiones, etc.

4. Por su parte, en el Sistema Interamericano, ambos derechos se consagran en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre[5] y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos[6], al señalarse que todas las personas tienen derecho a la protección de la ley contra actos que tengan injerencias arbitrarias en su honra, reputación, vida privada y familiar, así como en su libertad.

5. En nuestro sistema jurídico nacional, el derecho a la seguridad jurídica y el principio de legalidad se encuentran consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al proteger la libertad y seguridad de las personas, a partir de la exigencia de que, todos los actos de autoridad que causen sobre éstas molestias en ellas,

---

[1] CARBONELL Miguel, *Los derechos fundamentales en México,* Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Universidad Autónoma de México, 2004, pags. 585-589.
2 STC 27/1981, de 20 de julio de 1981, publicada en BOE no. 193, de 13 de agosto de 1981.
3 Cfr. con el contenido del artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
4 Cfr. con el contenido de los artículos 6, 9 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
5 Cfr. con el contenido de los artículos V y XXV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.
6 Cfr. con el contenido del artículo 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

papeles o posesiones, deben estar debidamente fundados y motivados. Es decir, las autoridades sólo podrán hacer aquello para lo que están expresamente facultadas y obligadas en una ley y, todo acto o procedimiento por el cual se interfiera en la esfera jurídica de un gobernado, debe estar previsto en una norma legal.

6. Se advierte entonces que, el bien jurídico protegido por el derecho a la legalidad es la observancia adecuada del orden jurídico por parte del Estado, entendiendo por éste la permanencia en un estado de disfrute de los derechos concebidos en el ordenamiento jurídico, sin que se causen perjuicios indebidos como resultado de una deficiente aplicación. La estructura jurídica del derecho a la legalidad implica un derecho subjetivo consistente en la satisfacción de la expectativa de no ser víctima de una inadecuada u omisa aplicación de la ley que traiga como consecuencia un perjuicio; como contrapartida, supone cumplir comportamientos obligatorios para la autoridad, sean éstos conductas de acción u omisión, y prohibir que se lleven a cabo[7].

7. Luego entonces, el derecho a la libertad es aquel que posee todo individuo de disponer de sí mismo y de obrar según su propia voluntad, limitado únicamente por los derechos de terceros y los diversos dispositivos jurídicos que permiten tener una convivencia ordenada[8]. "La libertad personal es la libertad física en el que se encuentran las personas, misma que debe ser protegida contra toda interferencia ilegal o arbitraria del estado"[9] .

8. En el ámbito universal, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en los numerales 9.1, 9.2 y 9.3, dispone que todas las personas tienen derecho a la libertad y a la seguridad personales, quedando prohibidas cualquier forma de detención o prisión arbitrarias. En consonancia, la Convención Americana sobre Derechos Humanos en los artículos 7.1, 7.2 y 7.3, conviene: "1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales, 2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas y 3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios".

9. En el sistema interamericano, se ha dispuesto que, cuando el derecho a la libertad personal se restringe o se niega, se afirma que se trata de una privación de aquél. En ese sentido, para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la privación de la libertad es considerada como cualquier forma de detención, encarcelamiento, institucionalización, o custodia de una persona, por razones de asistencia humanitaria, tratamiento, tutela, protección, o por delitos e infracciones a la ley, ordenada por o bajo control de facto de una autoridad judicial o administrativa o cualquier otra autoridad, ya sea en una institución pública o privada[10].

10. Para que la autoridad pueda restringir o limitar el ejercicio de este derecho, debe cumplirse con los requisitos formales y materiales del mismo, con el fin de evitar el abuso del poder estatal. Por esa razón, la jurisprudencia de la Corte Interamericana ha asumido de manera reiterada que: "cualquier restricción al derecho a la libertad personal debe darse únicamente por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas o por las leyes dictadas conforme a ellas (aspecto material), y además, con estricta sujeción a los procedimientos objetivamente definidos en la misma (aspecto formal)[11]".

11. El incumplimiento de estos requisitos pueden llevar a la materialización de una detención que puede calificarse como ilegal y/o arbitraria. Es claro que la inobservancia de los aspectos formal y material de la detención implican que la misma sea ilegal. Asimismo, las autoridades que ejecuten la detención deben respetar y garantizar los derechos de la persona detenida,

---

7 Comisión de Derechos Humanos del Estado de Jalisco, Recomendación 25/2016, 27 de julio de 2016, pags. 28,29
[8]CNDH. Recomendación 13/2017 del 30 de marzo de 2017, Párr. 95.
[9]Amparo Directo en Revisión 3506/2014, resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, párrafos 129 y 130. 24/62
[10]Recomendación No. 11 /2016 Sobre el Caso de la Detención Arbitraria, Desaparición Forzada y Ejecución Arbitraria en agravio de V1, en Anáhuac, Nuevo León, emitida por la CNDH, Ciudad de México, a 21 de marzo de 2016.
[11] Corte Interamericana de Derechos Humanos, Cuadernillo de Jurisprudencia No. 8

previamente reconocidos en el artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[12].

12. Sobre la arbitrariedad de las detenciones la Corte Interamericana ha señalado también que, tal y como lo establece el artículo 7.3 de la Convención Americana, "nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento por causas y métodos que aún calificados de legales puedan resultar incompatibles con el respeto a los derechos fundamentales del individuo por ser, entre otras cosas, irrazonables, imprevisibles, o faltos de proporcionalidad"[13]. En ese sentido, las agresiones físicas injustificadas y desproporcionadas, así como las agresiones o intimidaciones psicológicas que lleven a cabo las autoridades en el momento de la detención, califican a ésta como arbitraria.

13. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Chaparro Álvarez estableció que, los derechos a la libertad y seguridad personal, se encuentran regulados en el artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El derecho a la libertad personal "protege exclusivamente el derecho a la libertad física y cubre los comportamientos corporales que presuponen la presencia física del titular del derecho y que se expresan normalmente en el movimiento físico.

14. El artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tiene dos tipos de regulaciones bien diferenciadas entre sí: una general y otra específica. La general se encuentra en el primer numeral: "toda persona tiene el derecho a la libertad y a la seguridad personales". Mientras que la específica está compuesta por una serie de garantías que protegen el derecho a no ser privado de la libertad ilegalmente (art. 7.2) o arbitrariamente (art. 7.3), a conocer las razones de la detención y los cargos formulados en contra del detenido (art. 7.4), al control judicial de la privación de la libertad y la razonabilidad del plazo de la prisión preventiva (art. 7.5), a impugnar la legalidad de la detención"[14].

15. la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, establece que nadie puede ser privado de su libertad, sino en los casos y según las formas establecidas por leyes preexistentes.[15] En este sentido el estado parte, tiene la obligación de tomar medidas de carácter legislativo y, ejecutivo, para llevar a cabo las detenciones de acuerdo a la ley, por medio de las instituciones encargadas de la Procuración de Justicia, por conducto de la Agencias de Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia y, por conducto de los jueces del Poder Judicial Local.

16. El artículo 9.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, menciona que todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal, y que nadie podrá ser sometido a detenciones o privaciones arbitrarias. Así mismo, señala que nadie podrá ser privado de la libertad, salvo por las causas fijadas por la ley y con arreglo al procedimiento establecido en esta. Además, señala el deber del estado, por conducto de las instituciones jurídicas competentes, para informar a la persona a ser informada, al momento de su detención, de razones de la misma, y notificarle sin demora, de la acusación formulada en su contra.[16]

17. En el ámbito nacional, el derecho a la libertad personal se encuentra reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 14, párrafo segundo, el cual dispone que: "Nadie podrá ser privado de la libertad (…) sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho"[17]. En el mismo sentido el artículo 16, párrafo primero, constitucional establece que: "Nadie puede ser molestado en su persona (…) sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento[18]".

---

[12] Ídem
[13] Artículo 7.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
[14] Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez Vs Ecuador. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 21 de noviembre 2007.
[15] Articulo XXV de la Declaración Americana de los deberes y Derechos del Hombre
[16] El articulo 9.1 del pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos
[17] Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 14
[18] Ídem, Artículo 16

18. Entonces pues, el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, faculta la detención de cualquier persona, empero, únicamente cuando se justifiquen los siguientes tres formalismos: mediante **orden de aprehensión** girada por el Juez competente, por **orden de detención en caso urgente** girada por el Ministerio Público, o bien, en caso de **delito flagrante**.

19. En este sentido que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha señalado que, el derecho a la libertad comprende la posibilidad y el ejercicio positivo de todas las actuaciones dirigidas a desarrollar las aptitudes y elecciones individuales que no pugnen con los derechos de los demás, ni entrañen abuso a los propios y que, por tal motivo, la libertad la libertad personal es un derecho humano protegido tanto por la Constitución Federal (articulosa1, 11, 14 y 16) como en el ámbito internacional (artículos 2, 4 y 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículos I y XXV de la Declaración Americana de los derechos y Deberes del Hombre, y art. 7 de la Convención Americana sobre derechos Humanos)[19]

20. Aunado a ello, el propio Código Nacional de Procedimientos Penales, contempla los requisitos y condiciones para la configuración de las hipótesis de la detención en flagrancia y faculta a cualquier persona para detener a otra en la comisión de un delito flagrante, debiendo entregar inmediatamente al detenido a la autoridad más próxima y ésta con la misma prontitud al Ministerio Público. Y respecto de los cuerpos de seguridad pública, precisa que éstos estarán obligados a detener a quienes cometan un delito flagrante y realizarán el registro de la detención. Por lo tanto, en este caso o cuando reciban de cualquier persona o autoridad a una persona detenida, deberán ponerla de inmediato ante el Ministerio Público, quien realizará el registro de la hora a la cual lo están poniendo a disposición.

21. Unificado a lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se ha pronunciado a través de las siguientes tesis jurisprudenciales:

> “DETENCION QUE NO REUNE LOS REQUISITOS DEL ARTICULO 16 CONSTITUCIONAL EN VIGOR, SOLO PUEDE EXAMINARSE SI SE RECLAMA EN EL JUICIO DE AMPARO COMO ACTO AUTÓNOMO E INDEPENDIENTE DE FORMAL PRISIÓN.
> Si bien es cierto que el artículo 16 Constitucional en su párrafo primero señala que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posiciones, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, salvo las excepciones que se precisan en los párrafos cuarto y quinto del citado precepto constitucional, esto es, cuando se trata del delito flagrante en que cualquier persona puede detener al indiciado, o cuando se trata de delito grave así calificado por la ley y ante el riesgo fundado de que el indiciado puede sustraerse a la acción de la justicia, también es cierto que no es posible examinar o decidir en el juicio de garantías sobre la legalidad o no de la detención cuando se impugna el auto de formal prisión, esto es cuando solo se señala como acto reclamado el auto de término constitucional, pero no se reclama como acto destacado, el acuerdo mediante el cual el juez natural radica la causa y debe examinar la legalidad de la detención, pues se abordarían aspectos que no formaron parte de la litis en el amparo, que los que no son materia de suplencia ya que esta solo comprende conceptos de violación o agravios.
> PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO
> Amparo en revisión 36/94. José Luis de Jesús Roque t Otros, 14 de abril de 1994. Unanimidad de votos. Ponente. Enrique Dueñas Sarabia. Secretario: Ezequiel Tlecultl Rojas.

[19]Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos comentada, José Ramon Cossío Díaz (Coordinador) Tomo 1 Editor Tirant Lo Blanch.

> Nota: este Criterio ha Integrado la Jurisprudencia VI 1º J/1, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo I, Junio de 1995, Pág. 301“[20]
>
> FLAGRANCIA LA DETENCIÓN DE UNA PERSONA SIN EL CUMPLIMIENTO IRRESTRICTO DEL MARCO CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL QUE REGULA AQUELLA FIGURA DEBE CONSIDERARSE ARBITRARIA.
> El artículo 16, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé la siguiente descripción: cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en el que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más cercana y esta con la misma prontitud a la del ministerio público. Existirá un registro inmediato de la detención.” Por su parte los artículos 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, prevé como requisitos para que la detención de una persona sea válida que: 1. Sus causas y condiciones estén fijadas de antemano en la Constitución y en la ley; 2. Prohibición de la detención arbitraria; 3. La persona detenida debe ser informada, en el momento de su detención, de las razones de la misma, y notificada, sin demora, de los cargos formulados contra ella; 4. La persona detenida será llevada sin demora ante la autoridad competente, que verifique la legalidad de la detención; 5. Se ordene su libertad si la detención fue ilegal o arbitraria.
>
> Amparo en revisión 703/2012. 6 de noviembre de 2013. cinco votos para la concesión del amparo de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramon Cossío Diaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Mayoría de tres votos por el amparo liso y llano de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Disidentes: José Ramon Cossío Diaz y Jorge Mario pardo Rebolledo. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Encargado del engrose: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretario: José Alberto Mosqueda Velázquez”[21]

22. En el caso que se resuelve, **Q1,** hizo consistir su inconformidad en contra de elementos de la Policía Municipal de Zacatecas, por la detención de que fue objeto su hermano **A1,** ya que refiere que éste acudió a un convivio con seis compañeros en la Colonia H. Ayuntamiento, de Zacatecas, y que aproximadamente a las nueve de la noche del 18 de septiembre de 2019, ella le habló por teléfono y su hermano **A1,** le dijo que lo andaban siguiendo y cuando salió a buscarlo observó mucho movimiento policíaco de distintas corporaciones, acudiendo luego hasta ella su papá **T1,** a quien, elementos de la Policía Metropolitana y después elementos de la Policía de Investigación, le revisaron su taxi, ya que dijeron, les informaron que él traía personas que tenían un reporte; posteriormente recibió una llamada telefónica de su tía **T2,** quien le mencionó que su hermano estaba detenido, por lo que a las 11:20 horas, acudió a las instalaciones de la Policía Ministerial, donde observó a su hermano en la recepción de Policía Ministerial, y afuera de la agencia vio al señor **T3** padre de **JUAN (MANUEL) REVILLA (LÓPEZ)**, quien es elemento activo de la Policía Preventiva de esta ciudad, con quien su hermano tiene conflicto, el cual estaba con su hermano menor, a quien le aconsejaba que dijera cosas en contra de su hermano **A1**, según eso, porque le quitaron $30.00 pesos.

23. Al respecto, al ratificar la queja presentada a su favor, **A1**, expuso que aproximadamente a las 8:00 de la noche estaba en la Colonia […] conviviendo con sus amigos **T4** y **T5** en un

---

[20] Localización: Octava Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: XIII- Junio. página 557.
[21] Época: decima época. Registro 2006476, instancia: Primera Sala, Tipo de tesis: aislada, Fuente: Gaceta del Seminario Judicial de la Federación. Libro 6. Mayo de 2014, Tomo I, Materia(s): Constitucional, Tesis 1ª CC/2014(10ª). Página: 545

terreno baldío, a dos casas de un taller denominado “[…]”, tomando cerveza, a donde llegaron también **T6, T7** y **T8,** para lo cual encargaron 2 caguamas y que en eso pasó un joven con un muchachillo, pariente de los municipales que lo golpearon, y le dijeron al joven que se echara una caguama, y que éste les contesto que traía 30 pesos, y se los pidieron prestados, yendo el más pequeño a hablarle a un familiar, llegando una femenina, quien comenzó a hablar por teléfono, a amenazarlos y a burlarse, por lo cual se retiraron del lugar con rumbo a las vías del tren y que al observar a una patrulla de la Policía Preventiva que iba detrás de ellos, 3 corrieron para un lado y ellos continuaron por las vías, pero ya en la vialidad de Las Bolsas los estaban esperando, que continuaron hacia abajo para Las Bolsas, pero 6 o 7 oficiales les indicaron que se tiraran al suelo, siendo detenidos y trasladados directamente a la Policía de Investigación, aproximadamente a las 10:00 o 10:30 de la noche, sin decirles el motivo de la detención, y que fue estando ya en la Policía de Investigación donde les dijeron que fue por sospechosos de una detonación de arma de fuego.

24. Con posterioridad, **A1**, ante personal de este Organismo, previo citatorio para que presentara a sus testigos, manifestó no haberlos visto debido a que trabajan desde las 08:00 de la mañana hasta las 7:00 de la tarde; que de **T7** desconoce su nombre pero le dijo que él andaba fuera y que perdería prácticamente un día en su trabajo además de que para encontrar trabajo era difícil. Pero se comprometió a presentar a sus testigos **T4, T5, T6** y **T8**, el próximo martes 20 de febrero de 2020.

25. En relación a los hechos, el **M.B.A. ULISES MEJÍA HARO**, otrora Presidente Municipal de Zacatecas, informó que el oficial **JOSÉ GUADALUPE HERNÁNDEZ**, recibió un reporte vía radio de la Dirección de Seguridad Pública de Zacatecas, comunicando que en la Calle del Depósito se encontraban varios sujetos que realizaban amenazas con armas de fuego a las personas que transitaban por el lugar, como a las 21:00 horas los compañeros del grupo de reacción informan por radio que los sujetos del reporte, al observar la presencia de la policía corrieron rumbo a las vías del tren y que esos sujetos ya les estaban realizando disparos con armas de fuego, y al dar las vestimentas y características de los sujetos, se logra la persecución y detención de quien dijo llamarse **A1**, a quien en el momento de su detención se le procedió a dar lectura a sus derechos y hacerle saber el motivo de su detención, trasladándolo de inmediato a la Dirección de la Policía Municipal de Zacatecas, en la patrulla 189, para realizar los trámites correspondientes para ser puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, por hechos que pudieran ser constitutivos de algún delito.

26. Para respaldar su información, el **M.B.A. ULISES MEJIA HARO**, entonces Presidente Municipal de Zacatecas, exhibió el oficio suscrito por el **C. JOSÉ GUADALUPE HERNÁNDEZ,** Elemento de la Dirección de Seguridad Pública del Municipio de Zacatecas, en el que dejó a disposición de la Unidad de Investigación de Detenidos, de la Fiscalía General de Justicia del Estado, por hechos que pudieren ser constitutivos por el delito de disparo de arma de fuego, a **A1,** señalando en lo que interesa, que él se percató que los masculinos iban bajando por el cerro y al notar su presencia corrieron, por lo que los persiguió dándole alcance en el puente de La Araña a las 21:17 horas, a un masculino de nombre **A1** y realizó su detención, le dio lectura a sus derechos y en la unidad 189, los trasladaron a la Dirección de Seguridad Pública, para la realización de los trámites administrativos correspondientes.

27. Además, exhibió copia de la boleta de internación con folio número 34410, de fecha 18 de septiembre de 2019, del que se desprende que, siendo las 21:47 horas, el oficial de la Policía Preventiva Municipal, **JOSÉ GUADALUPE HERNÁNDEZ,** presentó ante Juez Comunitario en Turno, **LIC. JOSÉ LUIS TORRES CORDERO,** adscrito a la Dirección de Seguridad Pública del Municipio de Zacatecas, a **A1,** por la comisión flagrante de las faltas administrativas de escandalizar, injuriar, ofender personas y realizar disparos de arma de fuego, en la avenida García Salinas. Todas éstas consignadas en el artículo 20 de la Ley de Justicia Comunitaria, fracciones I, II, XXII. Asimismo, remitió la copia del certificado médico con folio número 33512, el cual se encuentra borroso e ilegible.

28. Al respecto, el **C. JOSÉ GUADALUPE HERNÁNDEZ,** Elemento de la Dirección de Seguridad Pública del Municipio de Zacatecas, mencionó que recibió un reporte vía 911, en el que comunicaban que en la colonia H. Ayuntamiento se encontraba gente armada en el área de la cancha, que en el reporte, el grupo táctico inició la persecución de las personas, especificó, que ellos permanecieron en el lugar, en caso de que descendieran del cerro. Señaló que escuchó al comandante (**JUAN CARLOS VILLAGRANA GONZÁLEZ),** decir que les estaban haciendo detonaciones de arma de fuego y que, al escuchar que se dirigían a unos 100 metros atrás de donde ellos se encontraban, ellos se fueron también hacia ese lugar, que cuando los vieron, les marcaron el alto, haciendo éstos caso omiso para huir hacia la Avenida Obrero Mundial, realizando así la persecución pie tierra. Sin embargo, al llegar a la altura del parque de SKATEBOARD, otra unidad de la Policía Preventiva les hizo el alto, y las personas se regresan hacia ellos, logrando la detención de éstos ahí en el lugar. Refiere que ellos (**él, JUAN MANUEL REVILLA LÓPEZ** y **JOSÉ GUADALUPE MÁRQUEZ HERRERA**), ayudaron sólo a esposar a una persona y, los oficiales de la sección de turno, se hicieron cargo del detenido, y si auxilian al oficial número 700 a subirlo a la patrulla; señalando que, después de una hora y media o dos horas, le llamaron para que lo pusiera a disposición.

29. Por su parte, el **C. JUAN MANUEL REVILLA LÓPEZ,** señaló que se trasladaba en compañía de los oficiales **JOSÉ GUADALUPE HERNÁNDEZ**, el oficial **479** y el comandante **MANUEL**, cuando se recibe reporte del 911, en el que comunicaban que andaba gente armada en la colonia H. Ayuntamiento, comentando que los iban carrereando por el cerro de Las Bolsas y que, en ese momento, comenzaron a realizar detonaciones de arma de fuego, por lo que ellos se detuvieron sobre la vialidad del cerro de Las Bolsas para esperarlos, que al ver que venían bajando, **JOSÉ GUADALUPE HERNÁNDEZ** corrió a darles alcance, mientras que él se cayó al suelo, quedándose atrás, y cuando llegó ya lo tenían asegurado **JOSÉ GUADALUPE HERNÁNDEZ, el oficial 700 y el 584,** quienes lo tenían en el suelo y esposado, por lo que solo los apoyó a subirlo a la unidad, ya que de ahí se lo llevaron directo al Ministerio Público. Refiere que el quejoso no traía ningún arma.

30. El **C. GREGORIO BRISEÑO RODRÍGUEZ**, Elemento de Seguridad Pública Municipal, expuso que se encontraba de recorrido por los sectores 10 y 6, por el Orito, con dos compañeros, uno de ellos el número **584**, cuando escucharon vía radio, que sus compañeros necesitaban apoyo, ya que andaban personas detonando armas de fuego en el cerro de Las Bolsas, por lo que se trasladaron al lugar, pero cuando llegaron ya tenían detenida a una persona, sin poder acercarse por encontrarse tapada la carretera, permaneciendo por el puente de la colonia Alma Obrera por espacio de 20 o 30 minutos.

31. En relación a ello, el **C. JUAN CARLOS VILLAGRANA GONZÁLEZ,** Comandante de Seguridad Pública Municipal, manifestó que andaba con su grupo de reacción, integrado por **él, YARIZA MONSERRAT FAJARDO, JONATHAN EDUARDO JUÁREZ CABRAL, HUGO ISAÍ BARRIOS SALDAÑA** y **JAIME SÁNCHEZ GARCÍA**; que, luego de recibir la orden de atender el reporte de que se encontraban varias personas de sexo masculino portando armas cortas y largas sobre la calle Arturo Espino, de la Colonia H. Ayuntamiento, a la altura de las vías, arribaron al lugar, y se percataron que había varias personas del sexo masculino, quienes se dispersaron en diferentes direcciones, por lo que ordenó a **YARIZA MONSERRAT FAJARDO, HUGO ISAÍ BARRIOS SALDAÑA** y **JAIME SÁNCHEZ GARCÍA,** que fueran por la Calle Prolongación, mientras que **JONATHAN EDUARDO JUÁREZ CABRAL** y él, persiguieron a las personas que iban por las vías del tren; que a mediados del puente peatonal del lugar donde se encontraba, escucharon una detonación de arma de fuego y, posteriormente otra, por lo que continuaron con la persecución, observando que bajaban las faldas del cerro de Las Bolsas hasta llegar a la vialidad, permaneciendo ellos en lo alto de las vías, observando la dirección que tomaban y viendo que los oficiales **JUAN MANUEL REVILLA LÓPEZ** y **JOSÉ PÉREZ (GONZÁLEZ),** entre otros, hicieron el aseguramiento de estas personas, mientras ellos se fueron a localizar los indicios del arma de fuego, sin encontrar nada.

32. En ese sentido, el **C. HUGO ISAÍ BARRIOS SALDAÑA,** elemento de la Dirección de Seguridad Pública del municipio de Zacatecas, señaló que llegaron al lugar del reporte y algunas personas les dicen que los sujetos se encuentran a un lado de las vías, en donde

acostumbran reunirse a tomar y a drogarse; que él y su compañera bajan hasta ahí, y el comandante les grita que es por otro lado, escuchando 3 detonaciones en dirección a la parte alta de las vías, que mientras el comandante y su compañero los persiguen pie a tierra, ellos (3), a bordo de la unidad, se dirigen para tratar de salir a la calle a interceptarlos, solicitando apoyo a otras corporaciones por desconocer el número de personas. Refiere que, en ese momento, observan que 2 venían por la calle Centenario y que, al ver la unidad, se regresaron y echaron a correr al cerro; que llegó la unidad 176 y él se va de copiloto, saliendo hasta la Obrero Mundial en la curva de La Araña, viendo que en el lugar se encontraban ya unidades de la Policía Municipal y los oficiales **JOSÉ GUADALUPE HERNÁNDEZ** y **JUAN (MANUEL) REVILLA LÓPEZ,** quienes los tenían detenidos, boca abajo. Señaló que él le puso los candados a **A1**, realizando la inspección en la capa de la unidad sin encontrarles nada ilícito, pero los dos si traían aliento alcohólico; señalando que posterior a que sacaron a más detenidos de una casa, se trasladaron a la Fiscalía General de Justicia, donde se preguntaban quien los pondría a disposición, diciéndole que él, porque supuestamente él los había detenido, cosa que no era cierto, porque quien los detuvo fueron **JOSÉ GUADALUPE HERNÁNDEZ** y **JUAN (MANUEL) REVILLA LÓPEZ**, a quienes se les indicó que los pusieran a disposición, y que a él le pidieron que se metiera con los detenidos hasta que se los recibieran los de aprehensiones.

33. Al respecto, la **C. YARISA MONSERRATH FAJARDO MEDRANO**, oficial de Seguridad Pública Municipal, mencionó que salió un reporte del 911 que comunicaba que había personas con arma de fuego y estaban amenazando a otra, en la colonia H. Ayuntamiento, por lo que llegando, se percataron de que estaban unos masculinos, quienes corrieron hacia las vías y otros hacia arriba; por lo que el Comandante **JUAN CARLOS VILLAGRANA GONZÁLEZ** y **JONATHAN EDUARDO JUÁREZ CABRAL,** se fueron pie tierra a darle seguimiento a las personas que corrieron hacia las vías, quedándose en la unidad ella, **JAIME SÁNCHEZ GARCÍA** y **HUGO ISAÍ BARRIOS SALDAÑA,** yendo a darle seguimiento a las personas que corrieron a la calle de arriba rumbo al cerrito a los cuales perdieron de vista; que llegó otra unidad y **HUGO ISAÍ BARRIOS SALDAÑA** acompañó al de esa unidad, que como no traían radio, le hablaron por teléfono al Comandante a quien recogieron por el cerro de Las Bolsas, por lo que desconoce cómo se realizó la detención del quejoso.

34. En torno a los hechos, el **C. JONATHAN EDUARDO JUÁREZ CABRAL,** Elemento de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, refiere que al llegar al lugar, se percataron de las personas, quienes a simple vista no se apreciaba que trajeran armas, pero éstos al ver su presencia echaron a correr sobre el cerro, por lo que el Comandante **JUAN CARLOS VILLAGRANA GONZÁLEZ** y él se bajaron de la unidad y le dieron seguimiento a dos masculinos sobre las vías del tren, quienes en las inmediaciones del puente realizaron 2 detonaciones y que, al cubrirse de la agresión, los perdieron de vista, y los observaron cuando iban bajando del cerro hacia la vialidad el cerro Las Bolsas, escuchando por radio que ya los había detenido, por lo que el comandante y él se regresaron a localizar casquillos o indicios del arma de fuego, pero no encontraron nada.

35. Igualmente, el **C. JAIME SÁNCHEZ GARCÍA** elemento de la Dirección de Seguridad Pública del Municipio de Zacatecas, manifestó que al acercarse al lugar 4 personas de sexo masculino se echan a correr sobre las vías, por lo que bajan de la unidad el Comandante **JUAN CARLOS VILLAGRANA GONZÁLEZ** y **JONATHAN EDUARDO JUÁREZ CABRAL,** para darles alcance, y que ellos, al ver a 2 personas correr hacia la calle de arriba, suben para ver si los pueden localizar, viendo que el final de la calle es el cerro y, al no encontrarlos, se bajan, cuando escuchan detonaciones y el Comandante les habla diciéndoles que vayan al puente del cerro de Las Bolsas, que ahí, su otro compañero, se traslada en otra unidad; que, posteriormente, el Comandante le habla por teléfono diciéndole que se acerque y al trasladarse de percata de que había varias corporaciones, Policía Metropolitana, Policía Estatal Preventiva y Policía de Investigación, observando que a 2 masculinos ya los tenían a bordo de una unidad municipal, desconociendo como se llevó a cabo la detención refiere que no vio de cerca a los detenidos.

36. En colaboración, el Inspector Jefe **JESÚS GABRIEL ZÁRRAGA POBLANO,** entonces Director General de Policía Metropolitana del Estado de Zacatecas, informó, que luego de que se actualizó la información vía radio, donde se señaló que la Policía Municipal de

Zacatecas detuvo a dos personas, y que otras escaparon en el taxi número 236, el cual se vio a la altura de la Calle Salvador Vidal de la Colonia H. Ayuntamiento del Municipio de Zacatecas, a las 21:52 horas, él acudió a verificar el reporte, a bordo de la unidad 666, acompañado por los Policías **FÉLIX EDUARDO MAURICIO VILLAGRANA** y **MANUEL IVÁN PINEDO HERNÁNDEZ**, y que al tener a la vista el taxi señalado, se procedió a entrevistar al chofer de nombre **T1**, quien les señaló que iba por sus familiares, ya que ahí era su domicilio, acudiendo unidades de Policía Municipal de Zacatecas, y a las 22:35 horas también el **LIC. VALERIO** de Policía de Investigación, quien también entrevistó al conductor del taxi sin más novedad.

37. Anexó a su informe, el Parte de Novedades suscrito por el propio Inspector Jefe **JESÚS GABRIEL ZÁRRAGA POBLANO,** del que se desprende un reporte vía radio recibido a las 21:30 horas por el Sistema de Emergencias realizado por un masculino, que reporta a 7 masculinos, refiere que están sobre la vía pública amenazando a personas, dice son Z, venden droga, traen armas largas, cortas, cuernos de chivo, se asienta que se hizo contacto con la usuaria para obtener más información, informando una femenina, que el usuario es su hijo y no se hiciera caso, porque es esquizofrénico, ofrece disculpas. Siendo las 21:07, el comandante Villagrana informa que, las personas se fueron con dirección a la calle Licenciados de la Colonia 21 de Julio, y que están disparando sobre las vías del tren, los Policías están a la altura del asta bandera y sobre a vialidad de Las Bolsas; a las 21:17, informa que tienen 2 detenidos. 21:37, se informa por Policía Municipal que los presuntos andan a bordo de una camioneta Ford doble cabina, se presume también que andan a bordo del taxi 236 que está sobre la calle Salvador Vidal: a las 21:46, el Policía Hernández comunica que tienen a 3 detenidos que estaban en el interior de un domicilio; a las 21:47, la unidad 666 al mando del Director de la Policía Metropolitana señala que se encuentra en la Calle Arturo Espino, Col. H. Ayuntamiento; a las 21:52, hace contacto con el taxi sobre la calle Salvador Vidal, se entrevista con el chofer **T1**, arriban unidades de Policía Municipal de Zacatecas, números 171, 176, 180, 186 y 190; a las 22:35, arriba el **LIC. VALERIO** de Policía de Investigación, se retiran sin ninguna novedad.

38. De igual manera, los **CC. MANUEL IVÁN PINEDO HERNÁNDEZ** y **FÉLIX EDUARDO MAURICIO VILLAGRANA**, Elementos de la Policía Metropolitana, señalaron que al llegar al lugar donde estaba el taxi 236, refiere el primero que procedió a dar seguridad perimetral, mientras que el segundo manifiesta que al hacer contacto con el chofer del taxi quien era una persona masculina ya adulta, le manifestó que estaba esperando a sus hijas, las cuales salieron al instante de un domicilio, notificando a la base sobre la situación del taxi, pero como no había indicios, se retiraron del lugar.

39. En su comparecencia el **LIC. JOSÉ LUIS TORRES CORDERO**, refirió que el 18 de septiembre en horario de 8:00 horas de la mañana y hasta las 8:00 horas del 19 de septiembre de 2019, se encontraba de turno, y le hicieron llegar sólo las actas de detención números 34410 y 34411, (correspondientes a **A1** y **T4**), para que tuviera conocimiento de que los oficiales **JOSÉ GUADALUPE HERNANDEZ** y **JUAN (MANUEL) REVILLA LÓPEZ,** pusieron a disposición del Ministerio Público a dos personas de forma directa, siendo falso que haya realizado alguna inspección ocular, ya que nunca los tuvo ante su presencia, afirmando que nunca estuvieron en la Dirección de Seguridad Pública, y que el acta firmada por él y el oficial captor **JOSE GUADALUPE HERNÁNDEZ** se la pasaron a firma después de que los detenidos estaban a disposición del Ministerio Público.

40. De las constancias de la Carpeta Única de Investigación marcada con el número […] que se formó como motivo de la denuncia y/o querella presentada por **T9**, en contra de **ELEMENTOS DE LA POLICÍA PREVENTIVA MUNICIPAL DE ZACATECAS,** por el delito de **ABUSO DE AUTORIDAD**, cometidas en perjuicio de **A1**, tramitada ante la Fiscal del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Delitos de Corrupción, de la Fiscalía General de Justicia del Estado, se desprenden las siguientes evidencias:

41. La ratificación que realizó el **A1**, quien precisó que entre nueve y nueve y media de la noche, se estaba tomando unas caguamas en la vía pública, acompañado de T5, T6, T7,

T8 y **T4,** en la esquina de la calle José Árbol y Bonilla de la Colonia H. Ayuntamiento de Zacatecas, cuando pasó un joven y sus compañeros le pidieron que si pichaba (invitaba) una caguama, contestando él que sí, que traía $30.00 pesos, que si les servían, cantidad que tomaron sus compañeros, y que iba otro joven que es pariente de unos oficiales de policía preventiva, a quien conoce de vista y le habló a su hermana, llegando ella y su mamá a la esquina donde ellos estaban y ella le habló a la policía municipal, por lo que ellos se bajan a las vías del tren cuando vieron unas patrullas que iban muy aceleradas, corrieron y al percatarse que los iban siguiendo él y **T4** corrieron hacia las vías y los otros 3 hacia arriba, pero en cuestión de minutos los siguieron, ellos corrieron cierta distancia yendo hacia el boulevard, por lo que al ver una patrulla, bajan él y **T4**, y atrás donde venían unos oficiales se oyó una detonación, por lo que al bajar ya estaba una patrulla parada, indicándoles que se pararan y se tiraran al suelo y ya en el suelo llegaron **JUAN (MANUEL) REVILLA (LÓPEZ)** y el cuñado de éste **JOSÉ GUADALUPE HERNÁNDEZ,** y lo esposaron entre los dos.

42. La entrevista de **T5,** levantada por Policía de Investigación, en la que señala que a las nueve de la noche estaban con **A1, T4**, **T6**, **T8, T7,** y **T10** tomando vino en la vía pública, y a esa hora, al ver que se acercaba una patrulla de la policía, todos decidieron correr por la vía del tren, cada quien con rumbo distinto, yéndose él hacia la Colonia del Ete, luego se regresa, se mete a la casa de su suegra y posteriormente se va para su casa, dándose cuenta de que sus amigos estaban detenidos hasta el día siguiente.

43. La entrevista de **T4**, acompañante del agraviado, ante Policía de Investigación, quien expuso ya cuando empezó a obscurecer pasaron unos chavos y **A1** los paró y les preguntó la hora, regresando 10 minutos después los chavos acompañados de sus papás, los cuales les comienzan a reclamar señalando a **A1,** diciéndoles que les iban a echar a la policía y que 20 minutos después ven llegar las unidades de la policía municipal, por lo que se asustaron y corrieron para la vía, dividiéndose, unos corrieron para la calle Zacatecas y él y **A1** corrieron por la vía, escuchando dos detonaciones de arma de fuego, por lo que bajaron a la carretera, haciéndole el alto como en 2 ocasiones las patrullas de Policía Municipal, pero como iban asustados siguieron corriendo, siendo detenidos metros más adelante y los llevaron a la Policía Ministerial.

44. De las copias de la carpeta de investigación, marcada con el número […], instruida en contra de los **CC. T7, T6, T8, T4, T11** y **A1 o (…)**, en perjuicio de **ELEMENTOS DE POLICÍA MUNICIPAL DE ZACATECAS**, **D1** y quien resulte ofendido; tramitada ante la Fiscal del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Detenidos, de la Fiscalía General de Justicia del Estado, además del oficio suscrito por el **C. JOSÉ GUADALUPE HERNÁNDEZ,** Elemento de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Zacatecas, mediante el cual deja a disposición de la Unidad de Investigación de Detenidos, de la Fiscalía General de Justicia del Estado, a **A1**, se cuenta entre otras con las evidencias siguientes:

45. Lo declarado por el **C. JOSÉ GUADALUPE HERNÁNDEZ,** Elemento de la Dirección de Seguridad Pública del Municipio de Zacatecas, quien en cuanto a su actuación manifestó; que luego de que comunicaron por radio que las personas que se perseguían estaban realizando detonaciones con arma de fuego entre el cerro y que iban bajando con rumbo a donde él se encontraba, que era en el puente que baja el cerro, decidió brindarles apoyo, ya que la unidad de reacción señalaba su ubicación, la vestimenta de los 3 masculinos y su dirección, los cuales al notar su presencia comenzaron a correr, por lo que inició la persecución, le dio alcance en el puente de La Araña a las 21:17 horas y realizó la detención de quien señaló como **A1,** quien vestía playera morada y pantalón de mezclilla obscuro, sin encontrarle nada ilícito, le dio lectura a sus derechos, se percató que los otros dos continuaron hacia el puente, por lo que a bordo de la unidad 189, se trasladó a la Dirección de Seguridad Pública Municipal para la realización de los trámites administrativos correspondientes y la correspondiente puesta a disposición.

46. Lo declarado por el **C. JOSÉ PÉREZ GONZÁLEZ,** elemento de Seguridad Pública Municipal, el cual señaló que se trasladó a la vialidad de Las Bolsas, esquina con Avenida García Salinas, concretamente donde se encuentra una glorieta, lugar a donde

supuestamente se dirigían las personas y observó a 2 masculinos de los que describe su vestimenta, que venían bajando del cerro para llegar al asta bandera, así como compañeros policías pie tierra que corrían detrás de ellos, prendió las luces de la unidad y los masculinos corren con dirección a la avenida Obrero Mundial, continuando sus compañeros detrás de ellos, por lo que aceleró su unidad y le dio alcance a un masculino que vestía color negro y pantalón de mezclilla color azul, que respondió al nombre de **T4,** sin traer nada ilícito, y procedí a realizar su detención a las 21:17, le dio inmediata lectura a sus derechos, trasladándolo a la unidad especializada de investigación a bordo de la unidad 186, para la realización de los trámites para la correspondiente puesta a disposición de la persona detenida.

47. Lo denunciado por el **C. JUAN CARLOS VILLAGRANA GONZÁLEZ,** elemento de la Dirección de Seguridad Pública del Municipio de Zacatecas, de la que se desprende, que a las 21:15 horas a bordo de la unidad 105, iban **JAIME SÁNCHEZ GARCÍA, HUGO ISAID BARRIOS SALDAÑA, JONATHAN EDUARDO JUÁREZ CABRAL, YARISA MONSERRATH ALFARO MEDRANO** y él, que cuando arribaron al lugar, observaron entre 6 o 7 personas del sexo masculino, quienes traían algo en sus manos sin saber que era, por lo que al ver la unidad comenzaron a correr, que al seguirlos en la unidad, que se percataron que se habían dividido, ya que unos corrieron para un cerro que da a las vías del tren y otros subieron por un callejón que da a la Calle Centenario, por lo que **JONATHAN EDUARDO JUÁREZ CABRAL** y él, pie tierra, persiguieron a los que se fueron sobre el cerro que da a las vías, yendo por toda la vía del tren, y que a la altura del asta bandera, miraron que 2 dos masculinos, sin saber características físicas ni vestimenta porque estaba muy obscuro, como que se iban a esconder en unos árboles, pero como su radio se escuchó muy fuerte, se dieron cuenta que iban detrás de ellos y salieron de donde estaban escondidos, que en eso escucharon 2 detonaciones de arma de fuego, por lo que le dijo a **JONATHAN EDUARDO JUÁREZ CABRAL,** que redujera silueta, realizando en ese momento él una detonación con su arma, hacia la pared del cerro, y los sujetos comenzaron a correr, realizando después su compañero otra detonación hacia el cerro, corriendo lo sujetos hacia la parte de abajo de la vialidad de las bolsas, pidiendo apoyo con sus compañeros, diciéndoles hacia donde se dirigían los sujetos, realizando la detención sus compañeros cuando bajaron las personas las vías y que al saber que no les habían encontrado ningún arma de fuego, él y su compañero se quedaron en las vías del tren para buscar el arma de fuego, sin encontrar nada, acompañando posteriormente a los policías de investigación al lugar de los hechos, los cuales sólo encontraron un cartucho percutido de una de las armas de estos policías, acudiendo al Ministerio Público a presentar la denuncia en contra de quienes resultaran responsables.

48. Lo denunciado por **D2,** del 19 de septiembre de 2019, de la que se advierte que, **M1** fue con **D2** y le dijo que querían golpear a **M2**, por lo que la denunciante junto con su hija **X2,** bajaron a la casa de **M3**, pero (**M2)** y **M3** ya se habían metido al domicilio, entonces su hija le habló a **M2** y le preguntó lo que había pasado, diciendo **M2**, que iban a la tienda cuando **A1** y compañía, les pidieron para una caguama, con la amenaza de que si no lo hacía, lo iban a dejar sin sandalias y sin chamarra y se percató que traían una navaja, por lo que **M3** les entrega $30.00 para evitar que los golpearan o le hicieran algo con las navajas ya que eran alrededor de 10 personas, entonces su hija reportó a la preventiva y al darse cuenta **A1,** alias “El Cua”, le comentó a otro que estaban hablando, que mejor se fueran, y que como **M3** salió para ir a comer a la casa de **D2**, **A1** cruzó palabra con **M3**, pero viendo que venían patrullas cuando iban a su casa, corrieron su denunciado y la bola que estaba con él, señalando a los policías donde se escondían, ya que los oficiales no los encontraban, y que aproximadamente a las 9 de la noche con 10 o 25 minutos aproximadamente, escucharon 2 detonaciones de arma de fuego, refiere que M3 por causa de sus estudios vive en esta ciudad y ella lo cuida, por lo que viene siendo su tutora, agregó que supo que al quitarles el dinero, **A1,** hizo una seña de que traía arma y que anteriormente ya lo habían ofendido.

49. Oficio signado por los **CC. OCTAVIO ESPARZA ORTIZ** y **MARCELINO CASTILLO RODRÍGUEZ,** Inspectores Jefes de la Policía de Investigación adscritos a las Unidades Especiales en la Investigación de Vehículos Robados y Mixta, mediante el cual ponen a disposición a las 01:30 del 19 de septiembre de 2019, a **T7**, **T6** y **T8**, por el delito de Allanamiento de Morada cometido en perjuicio de **D1.**

50. El Acta de entrevista a Testigo, de **D1**, levantada por **OCTAVIO ESPARZA ORTIZ** Inspector Jefe de la Policía de Investigación adscrito a la Unidad Especial en la Investigación de Vehículos Robados, en contra de **T7, T6** y **T8** por el delito de Allanamiento de Morada, descrita en el numeral 20.5.1.

51. Informe rendido por los **CC. FRANCISCO JAVIER LOZANO MEYMBERG** y **CÉSAR SALOMÓN SAUCEDO HERNÁNDEZ,** Inspector Jefe y Policía Primero de Investigación, respectivamente, adscritos a la Unidad Especializada en la Investigación contra el Robo, de fecha 18 de septiembre de 2019, mediante el cual dejan a disposición del Ministerio Público un CASQUILLO PERCUTIDO calibre .223 COLOR COBRE SIN MARCA VISIBLE, el cual fue fijado y asegurado con la debida cadena de custodia y embalada; anexando las correspondientes Actas de Registro e Inspección del Lugar del Hecho, visible en el numeral 20.7.1 y Acta de aseguramiento de objeto e inicio de cadena de custodia.

52. El Acta de Entrevista a Testigo, de **T12,** levantada por el Inspector Jefe **ÁNGEL SALAS MARTÍNEZ,** a la 13:38 del 19 de septiembre 2019, de la que se desprende que su esposo **T7, T6** y **T8** amigos de él, tomaban cerveza afuera de su domicilio, cuando llegaron tres camionetas por lo que ellos se asustaron, por lo que ella les gritó que se metieran a la casa por la parte de atrás o el patio, por los tiempos en que se vive, pero que como llegaron los policías y el comandante les dijo que si nos los sacaban los estaban encubriendo ya que ellos habían matado a una persona, permitieron que los sacaran, pero una vez que le informan que están detenidos por el delito de allanamiento de morada, refiere que no cometieron ese delito, por lo que solicita que se les libere.

53. La comparecencia rendida por la **C. D1**, a las 16:41 horas, del mismo 19 de septiembre de 2019, de la que se desprende, que al acudir su hija **X1,** para saber sobre la detención de su esposo (**T7),** y decirle la autoridad que ella había interpuesto una denuncia en contra de ellos por allanamiento de morada, lo desmiente, señalando que no fue no es así, ya que si permitió que la policía ingresara a su casa con su consentimiento, fue porque estaban asustados por las armas largas que éstos portaban y porque les dijeron que habían matado a una persona y andaban buscando a quien lo había hecho, y como su yerno y sus dos amigos habían entrado a su casa por la parte de atrás, ella les explicó a grandes rasgos, pero ahora que le explican que se les está imputando el delito de allanamiento de morada, no desea interponer ninguna denuncia porque las cosas no fueron así, ni cometieron tal delito.

54. El Incidente número […], respecto de los hechos que se investigan, en copia simple por el **C. I.S.C. GUSTAVO ALBERTO FERNÁNDEZ MEDINA,** Director del C-5, Zacatecas, del cual se desprende que se encuentra dividido y numerado del 1 al 94, recibido a las 20:50:55 y termina a la 22:36:25, del 18 de septiembre de 2019, que se transcribe en el numeral 20.10.

55. El Acta de Inspección de Objeto, realizada por el Inspector Jefe **C. JOSÉ ÁNGEL MARTÍNEZ SALAS,** de la Dirección General de Investigaciones, que contiene la descripción de un CD-R, color plateado de la marca SONY con velocidad para 700MB, rotulado con plumón negro con la leyenda “[…]”, que contiene la grabación completa del reporte realizado al 911, por un masculino, del 18 de septiembre de 2019.

56. El Acta de Inspección de Objeto, realizada por el Policía Primero de Investigación **C. JOSÉ ANTONIO MOTA PALAFOX**, en fecha 20 de septiembre de 2019, relativa a la descripción de un DVD-R, VERBATIN 4.7 GB. 16X120 Min. que contiene en 2 videos, el primero corresponde a la videograbación de la cámara ubicada en la Avenida García Salinas, La Araña, respecto del recorrido pie tierra de persecución de 2 personas, que realizan los elementos de la policía preventiva municipal el 18 de septiembre de 2019, a partir de las 21:14:05 y a las 21.33:05 horas; y el segundo corresponde a la Obrero Mundial, donde sólo se aprecia el puente que conecta con la Avenida García Salinas, pero no se aprecia nada en específico.

57. Los Dictámenes Fisicoquímicos para determinación de residuos de disparo de arma de fuego, practicados en las manos de **A1, T8, T11, T7, T6, T4,** por la **Q.F.B. OLGA FABIOLA LUGO GONZÁLEZ,** Perito Químico Forense de la Dirección de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado, en fecha 20 de septiembre de 2019, en los que se concluyó en los mismos términos, que en las muestras recabadas en las manos derecha e izquierda de cada uno de ellos, "**SI** SE DETECTARON PARTICULAS QUÍMICAS ASOCIADAS A LOS RESIDUOS DERIVADOS DE LA DETONACIÓN DE ARMA DE FUEGO".

58. Determinación que ordena la libertad de **A1**, dictada por la **LIC. ANDREA VIRIDIANA ARELLANO RUÍZ**, Agente del Ministerio de la Unidad Especializada en la Investigación número dos de la Capital, de fecha 20 de septiembre de 2019.

59. Dictamen de Estudio Identificativo, practicado por el **C. CARLOS ALEJANDRO LONGORA SMITH**, Perito Examinador de Laboratorio y de Balística Forense, en el que concluyó, que el casquillo rotulado como "1", corresponde al calibre por designación .223 Remigton.

60. Ahora bien, en este apartado, corresponde hacer el análisis de las evidencias anteriores, para determinar si la actuación de los elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Zacatecas, en la detención del agraviado **A1**, se encontró ajustada conforme a las atribuciones de los elementos policiales y a las exigencias legales de la detención, conforme lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los relativos del Código Nacional de Procedimientos Penales, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado y de su Reglamento, y demás Leyes generales y específicas, así como en los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos en relación a la materia.

61. En ese sentido, el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, en el párrafo quinto, que la detención del indiciado en flagrancia, la puede hacer cualquier persona en el momento en que aquél esté cometiendo el delito, o inmediatamente después de haberlo cometido.

62. Por su parte, en el artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales, contempla los requisitos y exigencias para la configuración de las hipótesis para la detención en flagrancia de una persona, cuando señala que, se podrá detener sin orden judicial en caso de flagrancia, en el momento de estar cometiendo un delito; y puede ser detenida después de cometerlo, cuando ésta haya sido sorprendida cometiéndolo y perseguida material e ininterrumpidamente; o bien, cuando después de cometido el delito, la persona sea señalada por la víctima u ofendido, o algún testigo presencial de los hechos o quien hubiere intervenido con ella en la comisión del delito o se cuente con información o indicios que hagan presumir fundadamente que intervino en el mismo.

63. Asimismo, la Ley de Justicia Comunitaria del Estado de Zacatecas, que regula específicamente la actuación de los elementos de Seguridad Pública Municipal, también contempla la figura de la flagrancia y establece en su caso que, se entenderá que el presunto responsable es sorprendido en flagrancia, cuando se presencie la comisión de la infracción o cuando inmediatamente después de ejecutada ésta se persiga materialmente y se detenga al infractor. Por lo que faculta a los elementos de policía en servicio, cuando presencien la comisión de una infracción comunitaria, para proceder a la detención del presunto responsable y presentarlo inmediatamente ante el juez comunitario correspondiente, con la respectiva boleta. Para lo cual, a su vez, también faculta con motivo de sus funciones, al Juez Comunitario, para que de forma inmediata, cuando tenga conocimiento que se trate de hechos que puedan constituir delito, haga la remisión al Ministerio Público, poniendo a su disposición al detenido.[22]

64. Bien, de las citadas constancias y concretamente del Incidente número […], remitido por el **C. I.S.C. GUSTAVO ALBERTO FERNÁNDEZ MEDINA,** Director del C-5, Zacatecas, se

[22] Artículos 29, 30 y 42 de la Ley de Justicia Comunitaria.

advirtió que el 18 de septiembre de 2019, a las 20:50:55 horas, se realizó un reporte señalando que 7 personas, que son Z, amenazaban a una persona y a su padre de muerte, los cuales portaban armas largas y cortas, dando los colores de sus vestimentas; por lo que acudieron las unidades de policía del comandante cubano, así como la número 657 y 105, a verificar la situación.

65. En el mismo reporte se asienta, que a las 21:01:22, se hace contacto con el usuario para obtener mayores datos, por lo que una femenina contestó y refiriendo que no se le hiciera caso, que el usuario es su hijo, quien tiene esquizofrenia y ofreció disculpas. Por lo que a las 21:04:34 horas, se desprende que se hizo del conocimiento a la base Metropol y a la Unidad que acudió al reporte la cual ya estaba en el lugar. Que se retira la unidad para continuar con su recorrido y se hace del conocimiento también al comandante cubano.

66. Pero, a las 21:07:32, comunica el comandante **VILLAGRANA** que las personas se fueron hacia la calle Licenciados de la Colonia 21 de Julio; que las personas están disparando sobre las vías, que los oficiales se encuentran por las vías a la altura del asta bandera y por la vialidad Las Bolsas, comunicando a las 21:17:49, que tienen a 2 personas detenidas.

67. Así las cosas, tenemos que el grupo de reacción conformado por los **CC. JUAN CARLOS VILLAGRANA GONZÁLEZ, JONATHAN EDUARDO JUÁREZ CABRAL, HUGO ISAÍ BARRIOS SALDAÑA, YARISA MONSERRATH FAJARDO MEDRANO** y **JAIME SÁNCHEZ GARCÍA,** Comandante y oficiales respectivamente, a bordo de la unidad 105, acudieron a atender el reporte dado inicialmente al 911, los cuales son coincidentes en manifestar que al arribar al lugar, observaron a varios masculinos entre 6 o 7, quienes al ver su presencia, corrieron, mismos que se dispersaron, yendo en persecución los **CC. JUAN CARLOS VILLAGRANA GONZÁLEZ** y **JONATHAN EDUARDO JUÁREZ CABRAL,** de dos personas que corrieron al cerro hacia las vías; mientras que los demás oficiales se fueron en busca de las otras personas que corrieron por la otra calle, como así se desprende de las declaraciones de cada uno de estos servidores públicos y del reporte citado.

68. De lo anterior se puede decir, que se aprecia correcta la actuación respecto a la atención del reporte del 911, que le dio el grupo de reacción mencionado, puesto que se señalaba presuntamente que en el lugar había personas con armas de fuego que amenazaban a otras. Reporte que si bien, minutos después se manifestó por la madre del reportante, que no se hiciera caso al usuario, por su situación de esquizofrenia, lo cual fue comunicado a las unidades policiales que acudieron a atenderlo, es cierto también que para entonces ya habían arribado al lugar las unidades, haciendo la retirada algunas de ellas como así lo informaron al 911.

69. Mas no así, la unidad municipal 105, que abordaban los elementos de la unidad de reacción, quienes al observar a varios masculinos que corrieron cuando detectaron la presencia de esa unidad policíaca, procedieron por tanto a su persecución, seguramente para cerciorarse del motivo de su acción, y al ver que se dispersaron, dos elementos policíacos continuaron con la persecución de dos de ellos, por lo que sin darles alcance sólo observaron cuando otros de sus compañeros procedieron a la detención del primero que respondió al nombre de **A1,** siendo posteriormente detenido el segundo de ellos con el nombre **T4**. Mientras que los demás oficiales se daban a la búsqueda y localización de otras 3 o 4 personas que corrieron con otro rumbo.

70. Sin embargo, se estima que la detención de que fue objeto **A1,** por los oficiales de Seguridad Pública Municipal de Zacatecas, se aprecia ilegal y arbitraria, si tomamos en consideración que ésta se realizó por dichos servidores públicos considerando la flagrancia en la presunta comisión del delito de disparo de arma de fuego, puesto que, de las evidencias que conforman tanto el expediente de la presente queja, como de la carpeta de investigación número […], instruida en contra de este agraviado por el delito de disparo de arma de fuego y ataque peligroso, en perjuicio de elementos de la Policía Preventiva de Zacatecas, no se desprende ningún medio de convicción, que venga a demostrar los requisitos exigidos para tal efecto, es decir, la flagrancia en la comisión del delito que se les imputa, esto es, que efectivamente **A1,** trajere un arma de fuego y la haya accionado o la

hubiere estado accionando en contra de alguno de sus persecutores o de cualquier otra persona, para considerar que cometió el delito o lo estuviere cometiendo, ya que no existe ningún dato que haga evidente tal acción, es decir, de que se haya observado que este agraviado o su compañero **T4**, trajeran en algún momento un arma o de que el agraviado haya disparado un arma de fuego en contra de los elementos de esa corporación.

71. Pues al respecto, no se cuenta con algún testigo presencial de lo anterior, y tampoco se contó con el objeto materia del delito o algún indicio relativo al mismo en el momento de su captura, es decir, que se le hubiera encontrado al agraviado al momento de su detención y/o en la revisión de su persona o sus ropas a **A1** algún arma de fuego o encontrado el arma de fuego en el lugar de los hechos o algún otro indicio que hiciere presumir que traían y dispararon a los oficiales en esa persecución un arma de fuego, y menos aún existe constancia, por los agentes que le dieron persecución, de que hubieren visto al agraviado cuándo disparó el arma de fuego en su contra, para configurar alguna de las hipótesis de flagrancia.

72. Ya que el **C. JUAN CARLOS VILLAGRANA GONZÁLEZ,** Comandante del grupo de reacción de la Policía Preventiva de Zacatecas, denunciante de este delito de disparo de arma de fuego y ataque peligroso y agente persecutor del citado agraviado, al respecto, refirió ante este Organismo, que a mediados del puente peatonal del lugar donde se encontraba, escucharon una detonación de arma de fuego y posteriormente otra, continuando con la persecución, observando a las 2 personas, desde que bajaban las faldas del cerro de Las Bolsas hasta que fueron detenidos por los oficiales **JUAN MANUEL REVILLA LÓPEZ** y **JOSÉ PÉREZ (GONZÁLEZ),** por lo que ellos se fueron a localizar los indicios del arma de fuego, sin encontrar nada.

73. Siendo coincidente en el mismo sentido, con lo que a su vez señala el oficial preventivo que lo acompañaba en la persecución, **C. JONATHAN EDUARDO JUÁREZ CABRAL,** quien sólo agregó que, por cubrirse de la agresión, cuando realizaron las detonaciones, perdieron de vista a las personas, y las observaron ya cuando iban bajando el cerro, así como también precisó, que cuando arribaron al lugar del reporte y se percataron de las personas, no apreció que trajeran armas a simple vista.

74. Sin embargo, ninguno de los dos detalla las circunstancias de modo ni de persona, puesto que el Comandante **JUAN CARLOS VILLAGRANA GONZÁLEZ,** sólo refiere haber escuchado 2 detonaciones, señalando que primero escuchó una y posteriormente otra, lo que significa entonces que éste, no vio quien realizó los disparos. Mientras que, por su parte, si bien, el oficial **JONATHAN EDUARDO JUÁREZ CABRAL,** asevera que estas personas realizaron las detonaciones y que se cubrieron de la agresión, a lo que no hace alusión el citado Comandante, también es cierto, que no da cuenta de quién y como lo hicieron.

75. Además de que ambos servidores públicos **JUAN CARLOS VILLAGRANA GONZÁLEZ** y **JONATHAN EDUARDO JUÁREZ CABRAL** son omisos en manifestar ante este Organismo, como lo hicieron ante el Ministerio Público, que ellos sí detonaron sus armas de fuego cada uno en una ocasión, al ir en persecución de las 2 personas que perseguían es decir de **A1** y **T4**, aunque refieran que lo hicieron hacia la pared del cerro o hacia el cerro que fue cuando estas dos personas corrieron hacia las faldas del mismo.

76. Aunado a que los demás oficiales solo se concretaron a mencionar que se escucharon detonaciones y que el Comandante **JUAN CARLOS VILLAGRANA GONZÁLEZ,** fue quien notificó vía radio, que les estaban realizando detonaciones, tal y como así se desprende también, del propio informe tomado por el 911.

77. En ese sentido, también los agraviados **A1** y **T4,** dentro de la carpeta de investigación, señalaron que fueron los oficiales persecutores, elementos de la Policía Preventiva Municipal de Zacatecas, quienes realizaron las detonaciones, ya que el primero menciona que se escuchó una detonación atrás donde venían unos oficiales, así como el segundo afirmó que corrieron hacia las vías, cuando escucharon 2 detonaciones que los hicieron bajar hacia la carretera.

78. Lo cual se corrobora con lo informado al Ministerio Público, por **FRANCISCO JAVIER LOZANO MEYMBERG** y **CÉSAR SALOMÓN SAUCEDO HERNÁNDEZ,** Inspectores Jefes de la Policía de Investigación, quienes el día de los hechos, encontraron en el lugar, un casquillo percutido calibre .223 color cobre sin marca visible, que tuvieron a la vista, concretamente sobre la grava de las vías del tren, ubicadas al poniente del Asta Bandera del Cerro de Las Bolsas. Reconociendo el Comandante **JUAN CARLOS VILLAGRANA GONZÁLEZ,** que al acompañar a los Policías de Investigación para la localización del arma de fuego o de algún indicio de la misma, sólo se encontró uno de los casquillos percutidos por sus propias armas de cargo.

79. Es decir, que los indicios encontrados en las constancias citadas, corresponden a los disparos de arma de fuego que reconocen realizaron los oficiales preventivos, pero ninguno indica la realización del disparo de arma de fuego por parte de **A1,** aún y cuando se cuente dentro de la carpeta de investigación […], con el resultado del Dictamen Pericial Fisicoquímico para determinación de residuos de disparo de arma de fuego, practicado en las manos de **A1,** por la **Q.F.B. OLGA FABIOLA LUGO GONZÁLEZ,** Perito Químico Forense de la Dirección de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado, que en ambas manos, "**SI** SE DETECTARON PARTICULAS QUÍMICAS ASOCIADAS A LOS RESIDUOS DERIVADOS DE LA DETONACIÓN DE ARMA DE FUEGO.

80. Documento el anterior, que por sí mismo, no puede constituir indicio para comprobar el delito de disparo de arma de fuego el día de los hechos en contra de los oficiales preventivos, imputado al agraviado **A1**, en razón a que, como se puede apreciar de los demás Dictámenes Fisicoquímicos para determinación de residuos de disparo de arma de fuego, practicados también por la citada **Q.F.B. OLGA FABIOLA LUGO GONZÁLEZ,** Perito Químico Forense de la Dirección de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado, en las manos de todos los demás compañeros del agraviado**,** como son **T8, T11, T7** y **T6,** que también fueron detenidos momentos después por diverso delito, se obtuvo idéntico resultado que el del imputado, al igual que el realizado a **T4**, a quien conjuntamente con el agraviado se le imputa este delito de disparo de arma de fuego y que igual que a todos, también resultó positivo para la detección de partículas químicas asociadas a los residuos derivados de la detonación de arma de fuego. Ya que tales dictámenes solo comprueban el contacto que todos tuvieron con las mencionadas partículas.

81. Por lo anterior se estima, que la detención realizada por el **C. JOSÉ GUADALUPE HERNÁNDEZ,** y demás elementos de la Policía Preventiva de Zacatecas, al agraviado **A1,** obedeció sin lugar a duda, a la información proporcionada por el propio Comandante **JUAN CARLOS VILLAGRANA GONZÁLEZ,** en el sentido de que las personas que perseguían les estaban realizando detonaciones y a las mismas detonaciones que realizaron el citado comandante y su acompañante el oficial **JONATHAN EDUARDO JUÁREZ CABRAL,** las cuales fueron escuchadas por los demás elementos policiales, dando por hecho que las personas que bajaban del cerro a la vialidad del cerro de Las Bolsas, eran los que realizaron los disparos, procediendo por ello a su detención, pero no porque quienes detuvieron al agraviado y a su acompañante los hayan visto realizar los disparos, ni les hubiesen encontrado arma de fuego o indicio alguno que hiciere presumir dicho hecho.

82. Pues de la narrativa consecutiva de los hechos motivo de análisis realizada en su comparecencia por la quejosa, del contenido de las declaraciones del agraviado, de lo testimoniado por los presenciales y las demás personas detenidas por diverso delito, lo declarado por los servidores públicos involucrados y lo informado por las autoridades que colaboraron en éstos hechos, y en fin, del contenido de las constancias de la investigación realizada tanto ante este Organismo como de las que integran las carpetas de Investigación […] y […], se advierte, que fue el Comandante **JUAN CARLOS VILLAGRANA GONZÁLEZ** y el oficial **JONATHAN EDUARDO JUÁREZ CABRAL,** quienes luego de atender el reporte de personas armadas y ver correr a unos masculinos, tras hacer su persecución, luego de realizar ellos mismos, primero uno y luego el otro, los disparos de arma de fuego, provocaron no sólo toda la movilización policial al comunicar vía radio, el primero de los citados, que los masculinos que perseguían les estaban haciendo detonaciones con arma de fuego, sino además la molestia en las pertenencias del señor **T1**, padre del detenido al revisarle y esculcarle el taxi que abordaba, por elementos de la Policía de Metropolitana, así como la

molestia en el domicilio de **D1**, para proceder a sacar a los compañeros del agraviado que se habían resguardado en dicho lugar, por elementos de la Policía de Investigación, toda vez que de las diligencias de investigación no se evidenció ninguno de los hechos comunicados e imputados al agraviado y sus compañeros, e informados por ese servidor público o por sus compañeros oficiales, derivados de dicha información. Circunstancia la anterior que, desde luego, debe tomarse en consideración para ser objeto de indagación y consecuentemente de reproche a los citados elementos de seguridad pública municipal.

83. Además de que, no pasa desapercibido para este Organismo, que previo a los hechos en que fue detenido **A1,** se suscitó otro hecho con unos jóvenes, cuando estaban tomando en la vía pública este agraviado y sus demás compañeros que también fueron detenidos por diverso delito, el cual, les fue reclamado al agraviado por **X2** y **D2,** (presumibles familiares del elemento de la Policía Municipal **JUAN MANUEL REVILLA LÓPEZ**) quienes les dijeron que iban a llamar a la policía y observaron hacer la supuesta llamada, razón por la cual corrieron, cuando observaron venir la unidad 105 del grupo de reacción, considerando que era por eso.

84. No obstante, de las declaraciones recabadas de los elementos de la Policía Preventiva Municipal de Zacatecas y demás evidencias, se advierte, lo que ya hemos analizado, que el arribo al lugar de la unidad oficial 105 que abordaba el grupo de reacción de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Zacatecas, obedeció al reporte del 911 realizado por el masculino que se dijo padecía de esquizofrenia, según el dicho de la madre, ya que dentro de las constancias de investigación no existe ninguna evidencia que indique que **X2** y/o **D2,** hayan realizado el reporte al 911 o a la Policía Preventiva Municipal de Zacatecas, y tampoco que por ello, hubiesen acudido al lugar esos elementos policiales.

85. Toda vez, que aun cuando es verdad que, de las constancias recabadas durante la presente investigación, se advierte que **D2,** en fecha 18 de septiembre de 2019, presentó denuncia ante el **LIC. DOMINGO LUJÁN PINEDO,** Agente del Ministerio Público, adscritas a la Agencia Permanente #9, instalada en el edificio de la Policía Ministerial, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, con respecto de los hechos de amenaza que refiere sufrió su **M2** y **M3**, por parte del agraviado, y cierto es también, que dicha denuncia se remitió por ese servidor público, a la **LIC. NANCY TAMAYO LOERA,** Agencia de Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Detenidos de la Capital, que integraba la carpeta de investigación número […] en contra de **A1**, por el delito de disparo de arma de fuego y ataque peligroso en perjuicio de los elementos de la Policía Preventiva Municipal de Zacatecas, misma que fue recibida por esta agencia, a las 03:35 horas del 19 de septiembre de 2019, según se advierte del sello fechador y la hora manuscrita, en la copia del oficio de remisión.

86. Tal denuncia, por el contexto de la integración de la Carpeta de Investigación número […], se advierte que se recibió después de la detención de **A1**, máxime que la quejosa **Q1,** manifiesta en su comparecencia, que luego de ser informada por su tía **T2,** de la detención de su hermano, acudió a las instalaciones de la Dirección de la Policía Ministerial (ahora Policía de Investigación), donde su hermano **A1**, se encontraba, y observó al señor**,** padre del señor **JUAN MANUEL REVILLA LÓPEZ,** elemento de la Policía Preventiva Municipal de Zacatecas, que estaba con (**M2**) el hermano menor de éste, a quien le aconsejaba que dijera cosas, que consideró la quejosa, eran en contra de su hermano **A1**.

87. Por lo que, en ese contexto, aún y cuando la denuncia de la **D2,** por los hechos suscitados momentos antes, se haya recibido en el mismo lapso en que el agraviado **A1**, estaba siendo puesto a disposición del Ministerio Público por la presunta comisión del delito de disparo de arma de fuego; tal circunstancia, de ninguna manera satisface los requisitos exigidos para la configuración de la flagrancia en la comisión del delito imputado por la denunciante, aparte de que de ninguna de las evidencias se advierte la intervención o participación en la detención del agraviado, por parte de los elementos de la Policía Preventiva de Zacatecas, con motivo de esos hechos.

88. Enseguida, analizaremos quienes fueron los elementos de Seguridad Pública Municipal de Zacatecas, que participaron en la detención de **A1**, ya que, como puede apreciarse de la

manifestación realizada por el Comandante **JUAN CARLOS VILLAGRANA GONZÁLEZ,** éste afirma que quienes procedieron a la detención de los masculinos que corrieron bajando el cerro hacia la vialidad del cerro Las Bolsas (**A1** y **T13**), fueron los oficiales **JUAN MANUEL REVILLA LÓPEZ** y **JOSÉ PÉREZ GONZÁLEZ**, mientras que ninguno de los mencionados reconoce haber detenido al agraviado.

89. El primero de los mencionados, refiere que quienes detuvieron a **A1,** fueron sus compañeros **JOSÉ GUADALUPE HERNÁNDEZ**, **el número 700** (que corresponde al nombre del oficial **GREGORIO BRISEÑO RODRÍGUEZ**) y **el número 584,** (que corresponde al oficial de nombre **HUGO ISAÍ BARRIOS SALDAÑA**)**,** aceptando que él solo ayudó **al oficial número 700** a subirlo a la unidad.

90. Por su parte, el segundo citado, si bien, aceptó que detuvo a **T13,** y se desprende que fue a la misma hora en que se detuvo a **A1**, jamás hace mención a la detención de este agraviado ni de quienes lo detuvieron, poniéndolo él a disposición del Ministerio Público, como si fuera un acto de detención separada.

91. Asimismo también el oficial **JOSÉ GUADALUPE HERNÁNDEZ**, en sus declaraciones niega haber detenido al agraviado **A1**, señalando que quien se hizo cargo de este detenido fueron los oficiales de turno, y al igual que el oficial **JUAN MANUEL REVILLA LÓPEZ**, señaló que él, **JUAN MANUEL REVILLA LÓPEZ** y **JOSÉ GUADALUPÉ MARQUEZ HERRERA** sólo ayudaron al **oficial número 700,** a subir al detenido a la unidad; por lo que si bien acepta **JOSÉ GUADALUPE HERNÁNDEZ**, que él suscribió el oficio de puesta a disposición de dicho detenido, ello fue porque le pidieron ese apoyo, a pesar de que en el citado oficio dicho servidor público acepta que fue él quien detuvo al citado agraviado.

92. Se advierte también, del testimonio de **A1** aunado al de **T4**, y a los testimonios de los oficiales de seguridad pública municipal involucrados en los hechos, que dicho oficial, llenó la boleta de internación de puesta a disposición del Juez Comunitario **JOSÉ LUIS TORRES CORDERO,** aseverando que su detención obedeció a escandalizar, injuriar, ofender personas y disparar arma de fuego, habiendo sido certificado por el médico adscrito a la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Zacatecas, sin haber trasladado a este detenido a dicha Dirección, sin haberlo puesto a disposición del Juez Comunitario en turno **JOSÉ LUIS TORRES CORDERO**, como este servidor público lo expone en su informe, al señalar que nunca tuvo a la vista al detenido, ya que refiere que dicha boleta de internación la llenó este oficial para justificar la puesta a disposición del Ministerio Público, la cual fue suscrita por el Juez Comunitario posterior a la referida puesta a disposición.

93. De igual forma, el oficial **HUGO ISAÍ BARRIOS SALDAÑA,** (número 584) afirma que, quienes tenían detenido al agraviado **A1**, fueron los oficiales **JUAN MANUEL REVILLA LÓPEZ** y **JOSÉ GUADALUPÉ HERNÁNDEZ**, a quienes apoyó a colocar los candados de mano al detenido. Ya que por otro lado, el Policía **GREGORIO BRISEÑO RODRÍGUEZ (**número 700), si bien reconoció que en la unidad que abordaba iba también el oficial **HUGO ISAÍ BARRIOS SALDAÑA,** (número 584), y se trasladaron al lugar pero, aseveró que cuando llegaron ya tenían detenida a una persona, y no pudieron acercarse porque estaba tapada la carretera, permaneciendo 20 o 30 minutos por el puente de la colonia Alma Obrera. Declaración la anterior, que se advierte contraria a lo señalado por el oficial **HUGO ISAÍ BARRIOS SALDAÑA.**

94. No obstante las contradicciones anteriores, de las citadas declaraciones se advierte el reconocimiento y la aceptación de cada uno de los oficiales mencionados en la intervención o participación en la detención de **A1,** en la colocación de candados de mano, en el apoyo para subirlo a la unidad y su traslado y en la puesta a disposición del Ministerio Público, sobre todo del oficial **JOSÉ GUADALUPE HERNÁNDEZ.**

95. En ese contexto, al no existir configurada ninguna de las hipótesis de flagrancia, en la presunta comisión del delito de disparo de arma de fuego, que se atribuyó al agraviado **A1,** por parte del Comandante del grupo de reacción de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Zacatecas, **C. JUAN CARLOS VILLAGRANA GONZÁLEZ,** se estima entonces que esa detención que sufrió el agraviado **A1,** fue ilegal y arbitraria por los razonamientos ya

expuestos y, consecuentemente también, violatoria de los derechos humanos de legalidad y seguridad jurídica en relación a no ser objeto detención arbitraria, en perjuicio del mencionado agraviado, conducta que desde luego, debe reprocharse a los elementos de la Policía Preventiva de Zacatecas involucrados, tanto en la detención como a los que originaron dicha detención y la movilización policial, a título de responsabilidad administrativa.

A) Derecho a la integridad y seguridad personal, en su modalidad del derecho a la integridad física.

96. El derecho a la integridad personal, consiste en la obligación que tienen las autoridades de respetar las condiciones físicas, psicológicas, sexuales y morales que permiten el desarrollo de las personas, así como en el deber de no someter a nadie a tortura o cualquier otro trato cruel, inhumano o degradante. Es decir, el derecho a la integridad personal implica que nadie puede ser lesionado o agredido física, psicológica o mentalmente. Por ello, el derecho a la integridad personal y, en particular, las prohibiciones de afectaciones ilegítimas al mismo se reconocen, acepta y protege.[23] Al estar la integridad personal directamente vinculada con la dignidad humana, las formas de afectación son variadas y muchas de ellas no tan evidentes como lo son las formas más agravadas de violación de este derecho.[24]

97. En el marco normativo del Sistema Universal de Protección a los Derechos Humanos, el derecho a la integridad personal se establece en los artículos 3 y 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, así mismo, en los artículos 7 y 10 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y, en el artículo 2 de la Declaración sobre la protección de todas las formas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Preceptos en los que, de manera similar, se establece que todas las personas tienen derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral y que, en correspondencia, nadie debe ser sometido a torturas ni penas, o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

98. Al efecto, el Comité de Derechos Humanos, el cual supervisa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su Observación General 20, de 10 de marzo de 1992, dispuso que el derecho a la integridad personal protege a los individuos de daños físicos o mentales provocados o que puedan ser ocasionados por una multiplicidad de acciones y omisiones tanto de las autoridades que hagan uso de sus potestades públicas, de las autoridades que no se encuentren investidas en ese momento de su cargo público, así como de los actos de entes particulares.

99. En relación a la regulación del derecho a la integridad personal en el Sistema Interamericano de derechos humanos, éste se encuentra estipulado en el mismo sentido en los artículos 1 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en donde señala que *"Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona". Asimismo, el artículo 5.1.* de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en donde, en su párrafo primero, señala que "*Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica o moral"*. Por su parte, la Corte Interamericana ha señalado *que la infracción del derecho a la integridad física y psíquica de las personas es una clase de violación que tiene diversas connotaciones de grado y que abarca desde la tortura hasta otro tipo de vejaciones o tratos crueles, inhumanos o degradantes cuyas secuelas físicas y psíquicas varían de intensidad según los factores endógenos y exógenos que deberán ser demostrados en cada situación concreta.*[25]

100. En lo referente a la seguridad personal, esta se refiere a la protección contra las lesiones corporales.[26] El derecho a la seguridad personal, [no] se limita a la protección contra las lesiones intencionadas. Los funcionarios de los Estados partes violan el derecho a la

[23] Convención Americana Sobre Derechos Humanos comentada, Claudio Nash: Artículo 5, Derecho a la Integridad Personal, página 134. Suprema Corte de Justicia de la Nación – Konrad Adenauer Stiftung.
[24] Ídem.
[25] Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso *Loayza Tamayo vs. Perú*, Sentencia de Fondo. 17 de septiembre de 2007, párr. 57.
[26] Proyecto de Observación general Nº 35 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, párrafo 3.

seguridad personal cuando injustificadamente infligen lesiones corporales, independientemente de que la víctima esté o no detenida. [27]

101. En nuestro País, el artículo 1°, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, ordena la prohibición de todo tipo de acto que atente contra la dignidad humana, y que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. A su vez, el artículo 16, párrafo primero, 19, párrafo séptimo, y 22, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se reconoce que todas las personas son titulares de los derechos reconocidos en los tratados internacionales de derechos humanos en los que el Estado Mexicano sea parte, y el derecho de toda persona a ser tratada humanamente y con el debido respeto a la dignidad inherente al ser humano, lo cual incluye el deber de los servidores públicos de salvaguardar su integridad personal.

102. Asimismo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho a la integridad personal, en los artículos 14 y 16, conforme a los cuales nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio o posesiones y que, en caso de que alguna persona sea molestada, dicha acción debe estar sustentada en mandamiento escrito de autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

103. De igual forma, los funcionarios públicos encargados de hacer cumplir la Ley, en el desempeño de sus funciones, tienen la obligación de respetar y proteger la dignidad humana y de mantener y defender derechos humanos de todas las personas.[28] Igualmente, los servidores públicos están obligados a observar buena conducta en su empleo, cargo o comisión tratando con respeto, diligencia, imparcialidad y rectitud a las personas con las que tenga relación en el ejercicio de sus funciones.[29]

104. **Q1,** hizo consistir también su inconformidad en contra de elementos de la Policía Municipal de Zacatecas, por la agresión que sufrió su hermano **A1,** por parte de éstos cuando fue detenido, pues refirió que una vez que se comunicó vía telefónica con su hermano, aproximadamente a las nueve de la noche del día 18 de septiembre de 2019, sin decirle quien, recibiendo posteriormente una llamada telefónica de su tía **T2,** quien le mencionó que su hermano estaba detenido, que al parecer estaba golpeado y había sido trasladado a la instalaciones de la Policía Ministerial (ahora Policía de Investigación), al acudir a las instalaciones de dicha corporación, lo observó en la recepción de esa Institución golpeado, señalando que afuera de esa agencia se encontraba también el señor **T3,** padre de **JUAN (MANUEL) REVILLA (LÓPEZ)**, quien es elemento activo de la Policía Preventiva de esta ciudad, con quien su hermano tiene conflicto, el cual se encontraba con el hermano menor de éste, aconsejándolo para que dijera cosas en contra de su hermano, porque según eso, le quitaron la cantidad de $30.00 pesos (treinta pesos 00/100 M.N.).

105. En la entrevista que, personal de este Organismo, sostuvo con **A1**, persona agraviada, privada de su libertad en las Instalaciones de la ahora Dirección de la Policía de Investigación en fecha 19 de septiembre de 2019, se desprende que **A1**, manifestó encontrarse aturdido por los golpes recibidos por elementos de Policía Preventiva de Zacatecas, sin ratificar su queja en ese momento, por referir no estar en mejores condiciones físicas para hacerlo, y solicitó se le visitara al día siguiente para dar su versión, o bien, de obtener su libertad, él personalmente acudirá a este Organismo. No obstante, es importante señalar que, personal de esta Comisión observó que el agraviado presentaba lesiones en el rostro.

106. En la comparecencia de ratificación de queja, **A1**, expuso que, ya en la vialidad de Las Bolsas los estaban esperando unos policías, los cuales les indicaron que se tiraran al suelo, siendo entre 6 y 7 oficiales. Pero que 2 de ellos, estando él en el suelo, lo agredieron a patadas en la cabeza y en la nariz, refiere que se volteaba para protegerse en el pavimento y con la misma patada le levantaban su cabeza, y le propinaron también un golpe en el costado derecho. Agregó que ambos policías, le pusieron sus pares de esposas, y que él les pedía las aflojaran y le dijeron que se callara y no llorara, lo levantaron del piso y de

[27] Proyecto de Observación general Nº 35 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, párrafo 8.
[28] Artículo 2 del Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley.
[29] Artículo 6 fracción IV de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Zacatecas.

inmediato lo subieron a la caja de la patrulla, lo pusieron boca arriba, llevando el rostro ensangrentado, y de ahí lo trasladaron directamente, a policía de investigación, y no lo llevaron a separos preventivos (de Seguridad Pública Municipal).

107. Asimismo, se cuenta con 4 impresiones fotográficas, que ilustran las lesiones que presenta en su integridad corporal, el agraviado **A1,** tomadas por personal de este Organismo al momento de la ratificación de su queja, la cual se anexa a la queja presentada por **Q1.**

108. También, de lo denunciado por **T9**, por el delito de Abuso de Autoridad cometido en perjuicio de **A1**, de fecha 20 de septiembre de 2019, se desprende que observó que su hermano estaba todo golpeado, percatándose de que traía golpes en la nariz, en la sien del lado derecho, en el cuello, en una de las manos, que estaba exageradamente golpeado, y que su padre **T1**, pasó a ver a su hermano **A1** a los separos de la Policía Ministerial, y cuando salió y le comentó que su hermano le dijo que, una vez que los elementos de Policía Preventiva de Zacatecas lo detuvieron, no lo llevaron a las instalaciones sino que lo anduvieron paseando en la patrulla número 186, acompañándolos otra patrulla número 105 y que fue en ese momento cuando los policías lo golpearon.

109. En la ratificación de la denuncia, **A1**, señaló que cuando se pararon les dijeron que se tiraran al suelo, tirándose él y **T4**, y cuando estaba en él, **JUAN MANUEL REVILLA LOPÉZ** y su cuñado a quién le apodan "[…]", de nombre **JOSÉ GUADALUPE HERNÁNDEZ**, quienes son oficiales de la Policía Preventiva, insultando a **A1,** quien en cuanto cayó al suelo se le cayó también su celular, al cual **JOSÉ GUADALUPE HERNÁNDEZ** y **JUAN MANUEL REVILLA LÓPEZ,** se lo aventaron de una patada, siendo el primero, al que también le dio una patada en la cabeza. De ahí tanto **JUAN MANUEL REVILLA LÓPEZ** y su cuñado **JOSÉ GUADALUPE HERNÁNDEZ**, lo patearon en la cabeza, lo esposaron entre los dos y le colocaron cada quien sus esposas, o sea, le pusieron dos esposas, muy fuertes, apretadas, por lo que les pedía que se las aflojaran, y el comandante de la Municipal que venía en otra patrulla, se las desapretó, llevándolo al Ministerio Público. Señala que **JUAN MANUEL REVILLA LÓPEZ,** siempre se la hacía de emoción, y él se volteaba a otro lado para no tener problemas con la policía, pero no sabe por qué **JUAN REVILLA** y **JUAN GUADALUPE HERNÁNDEZ** tengan problemas con él. Manifestó que, en consecuencia, a consecuencia de las patadas, sufrió una fractura de la nariz, ya que no dejó de sangrar.

110. Del informe de investigación rendido por los **CC. LIC. SALATHIEL VALDEZ VALADEZ, LIC. ALEJANDRA MARTÍNEZ GÓMEZ** y **JOSE ARTURO ESQUIVEL ZEPEDA,** Inspector Jefe y Policías Primero, de la Policía de Investigación, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, con motivo de la entrevista que le realizaron a **T4** se desprende su testimonio, señalando que éste y **A1** iban asustados y continuaron corriendo, siendo detenidos unos metros más adelante y los comienzan a golpear, los suben a una patrulla, donde son cuestionados del por qué corrieron, respondiendo que se habían asustado, por lo que golpean a su amigo **A1** y le pisan la cabeza, a él lo esposaron, les preguntaron que a dónde se fueron los otros tres sujetos que corrieron, e incluso los llevaron a los domicilio donde estaban, después se los trasladaron a la Policía Ministerial, pero en el traslado continuaban golpeando su amigo A1, señalando que fueron detenidos a la altura del puente de La Araña y ahí, es donde fueron agredidos físicamente por los policías municipales.

111. El testigo de **T4**, acompañante y detenido del agraviado, ante Policía de Investigación expresó que corrieron porque se asustaron (previo los disparos), que en eso a su amigo **A1,** lo comienzan a golpear y a patearle la cabeza, señala que a él solo lo esposaron, que les preguntaban que a donde se fueron los compañeros y los mandaron al domicilio donde estaban, sin saber qué pasó con sus amigos, y que a su amigo **A1** y a él los llevaron a la Policía Ministerial; que, al ir en el camino, a su amigo **A1,** le seguían pisando la cabeza y golpeándolo, preguntándole por qué había corrido. Menciona que sí los detuvieron en la vialidad del puente de la Araña, siendo agredidos físicamente por los policías municipales.

112. Por su parte, el **M.B.A. ULISES MEJÍA HARO**, otrora Presidente Municipal de Zacatecas, sin negar o reconocer que sus elementos policiales hayan vulnerado los derechos humanos de **A1,** por un lado, luego de narrar la persecución policial, señaló que

A1, fue puesto a disposición del Ministerio Público por la comisión del delito de disparo de arma de fuego y por otro, argumentó que **T3,** padre de **JUAN MANUEL REVILLA LÓPEZ,** elemento activo de la Policía Preventiva de Zacatecas quien no intervino ni participó en los hechos, y el hermano menor de éste, no son servidores públicos.

113. Al respecto, el **C. JUAN CARLOS VILLAGRANA GONZÁLEZ,** Elemento de la Policía Municipal, ante este Organismo, señaló que cuando él y el oficial **JONATHAN EDUARDO JUÁREZ** observaron que las personas a las que perseguían corrieron hacia las faldas del cerro, ellos permanecieron en lo alto de las vías, observando la ubicación o dirección que tomaban las personas que perseguían, llegando posteriormente los compañeros **JUAN MANUEL REVILLA** y **JOSÉ PÉREZ** entre otros a la vialidad de las bolsas y que ellos realizan el aseguramiento, por lo que su compañero y él se dispusieron a localizar indicios o el arma de fuego con el que se realizaron las detonaciones, sin encontrar nada por el horario que era noche y no se veía nada.

114. El citado Comandante **JUAN CARLOS VILLAGRANA GONZÁLEZ,** ante el Ministerio Público, expuso que, cuando los sujetos bajaron de las vías y sus compañeros realizaron la detención, vía radio les preguntó, si les habían encontrado algún arma de fuego, y que al ser negativo, su compañero y él se quedaron en las vías del tren para buscar el arma de fuego con la que habían realizado las detonaciones, pero no lograron encontrar nada y posteriormente acompañaron a los policías de investigación al lugar de los hechos para ver si encontraban algún indicio, pero solo se encontró un cartucho percutido de una de las armas de esos oficiales, por lo que después se trasladaron al Ministerio Público para presentar la denuncia correspondiente, en contra de quienes resultaran responsables.

115. Ante ese Organismo, el **C. JONATHAN EDUARDO JUÁREZ CABRAL,** señaló que se escuchó por radio que ya los habían detenido, por lo que el comandante y él se regresamos a localizar casquillos o indicios del arma de fuego, ya que los compañeros comunicaban que habían tirado el arma sobre el cerro y ahí permanecieron buscando sin encontrar nada, esperando sólo a que sus compañeros pasaran por ellos al cerro de Las Bolsas.

116. Asimismo, el **C. JOSÉ GUADALUPE HERNÁNDEZ** señaló ante este Organismo, que de la unidad en la que andaba, solo descendieron **JUAN MANUEL REVILLA LÓPEZ, JOSÉ GUADALUPE MÁRQUEZ HERRERA** y él, y sólo se aproximaron para ayudar a los oficiales de la sección que estaba trabajando en turno, del que sólo recuerda al oficial con el número siendo […], al aseguramiento de una persona, colocándole los ganchos de seguridad y se retiraron, siendo falso que sus compañeros hayan golpeado al detenido, además de que cuando apoyó a sujetarlo para colocarle los candados lo levantó con ayuda del oficial 700 y lo subieron a la patrulla inmediatamente, aclaró que el detenido no estaba golpeado, no traía sangre en el rostro ni el quejoso realizó ninguna manifestación, aclaró que solo brindó apoyo al comandante **JUAN CARLOS VILLAGRANA GONZÁLEZ**, pues manifestó que lo tenía en persecución por el reporte de que andaba gente armada y después de los disparos de arma de fuego, finalmente le llaman para que los apoye para ponerlo a disposición para esto ya había pasado un lapso de una hora y media o dos horas aproximadamente y cuando lo vio y ya se veía golpeado pues tenía una lesión en el rostro, en la frente, como una inflamación tipo chichón enrojecido, no le vio liquido hemático, que él sólo firmó la puesta a disposición.

117. El **C. JOSÉ GUADALUPE HERNÁNDEZ,** Elemento de la Dirección de Seguridad Pública del Municipio de Zacatecas, ante el Ministerio Público, afirmó que realizó la detención de **A1,** percatándose que otras dos personas continuaron su camino hacia el puente y que de inmediato se trasladó a la Dirección de Seguridad Pública a bordo de la unidad 189 para la realización de los trámites correspondientes.

118. El oficial **HUGO ISAÍ BARRIOS SALDAÑA**, Elemento de la Policía Preventiva Municipal, aseveró en esta Institución, que cuando iban llegando observó que los oficiales **GUADALUPE HERNÁNDEZ** y **JUAN MANUEL REVILLA LÓPEZ** ya los tenían detenidos, en el piso boca abajo, no estaban esposados, por lo que él sacó sus candados y se los colocaron a **A1** y no vio en ese momento si estaban golpeados, los subieron a la unidad, se incorporan y se colocan en la tapa de la unidad y se comienza a realizar su inspección, refiere que los dos traían aliento alcohólico, y que fue hasta ese momento que pudo

percatarse de que **A1** traía lesiones en el rostro, que se trasladada a fiscalía, lugar en el que se preguntan quién los pondría a disposición, aclarando que quien realizó esa detención fue **JOSÉ GUADALUPE HERNÁNDEZ** y **JUAN REVILLA** catalogando de falso que él haya realizado la detención, motivo por el cual se les indicó a los captores que regresaran a ponerlos a disposición, por lo que se le instruyó permaneciera con los detenidos alrededor de tres o cuatro horas, por lo que pudo ver que para ese momento ya estaba el quejoso hinchado y con líquido hemático en el rostro, pero nunca mencionó que lo habían golpeado sus compañeros.

119. Al respecto, ante esta Comisión, el **C. JUAN MANUEL REVILLA LÓPEZ,** elemento de la Dirección de Seguridad Pública del Municipio de Zacatecas, mencionó que se trasladaba a dar servicio a la feria, en compañía de los oficiales **JOSÉ GUADALUPE HERNÁNDEZ**, **el oficial 479** y el comandante **MANUEL** (del que no menciona apellidos), y que se detuvieron sobre la vialidad del cerro de Las Bolsas para esperar y cuando ven a los masculinos que vienen bajando, **JOSÉ GUADALUPE HERNÁNDEZ** corre a darles alcance, mientras que él se quedó atrás, dado que se cayó al suelo, y cuando llegó, ya lo tenían asegurado sus compañeros **JOSÉ GUADALUPE HERNÁNDEZ,** el oficial **700** y el **584**, quienes lo tenían en el suelo esposado, permaneciendo en el suelo como cinco minutos, en lo que llegó la patrulla para subirlo, que lo subieron a la unidad **él, el oficial 584 y JOSÉ GUADALUPE HERNÁNDEZ**, que él no se dio cuenta de que trajera lesiones, y que además, solo apoyó a subirlo a ésta ya que de ahí se lo llevaron directo al ministerio público, y que el quejoso no traía ningún arma.

120. Se exhibió también el escrito signado por el **C. JUAN MANUEL REVILLA LÓPEZ**, en su carácter de Policía Municipal de Zacatecas, presentando su renuncia con carácter irrevocable para que se dé por terminada su relación laboral y administrativa y se efectúe su baja de correspondiente, que dirige el **P.P.A.F. JORGE EDUARDO MUÑOZ FRANCO**, entonces Director de Seguridad Pública Municipal de Zacatecas.

121. En su entrevista como elemento captor, el **C. JOSÉ PÉREZ GONZÁLEZ,** Elemento de Seguridad Pública Municipal, expuso que los masculinos se echaron a correr sobre la Avenida García Salinas con dirección a la Avenida Obrero Mundial, y sus compañeros detrás de ellos, que él aceleró su unidad y le dio alcance a quien respondió al nombre de **T4,** quien traía playera azul y pantalón de mezclilla, por lo que siendo las 21:17, procedió a realizar la detención, dándole inmediata lectura a sus derechos, trasladándolo a la unidad especializada de investigación a bordo de la unidad 186, para la realización de los trámites para la correspondiente puesta a disposición de la persona detenida.

122. La **C. YARISA MONSERRATH FAJARDO MEDRANO**, elemento de la Dirección de Seguridad Pública del Municipio de Zacatecas, ante personal de esta Institución, manifestó que ella se quedó con **JAIME SÁNCHEZ GARCÍA**, y dieron unas vueltas para ver si detectaban a las personas, pero ya no vieron a nadie, y como no traían radio, le marcaron con teléfono al Comandante **JUAN CARLOS VILLAGRANA GONZÁLEZ,** para recogerlo y él les dijo que se fueran rumbo al cerro de Las Bolsas y ahí lo recogieron.

123. El **C. JAIME SÁNCHEZ GARCÍA**, elemento de la Dirección de Seguridad Pública del Municipio de Zacatecas, rendida ante personal de esta Institución, expresó que le habló el Comandante **JUAN CARLOS VILLAGRANA GONZÁLEZ,** y le dijo que se fuera para el puente del cerro de Las Bolsas, siendo acompañado por **YARISA MONSERRATH FAJARDO MEDRANO,** por lo que cuando el comandante Comandante **JUAN CARLOS VILLAGRANA GONZÁLEZ,** le habló para que se acercara, se trasladó y se percató de que ya había varias corporaciones de Policía Metropolitana, Policía Estatal y Policía de Investigación, observando que ya venían dos masculinos a bordo de una unidad municipal.

124. Del certificado médico con número de folio […], practicado a las 21:47 horas, del 18 de septiembre de 2019, al **A1,** por el **DR. FELIPE JOSÉ CARMONA BORJON,** Médico de Guardia adscrito a la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Zacatecas, con cédula profesional número […], de fecha 18 de septiembre de 2019, se desprende que este presenta múltiples contusiones en cráneo, equimosis rojiza en región frontal izquierda,

equimosis con aumento de volumen en parpado derecho, equimosis de 9x7 cm en cuello lado derecho.

125. En adición, del Certificado Médico de Lesiones, practicado a las 02:20 horas del 19 de septiembre de 2019, al **A1,** por el **C. DR. CHRISTIAN ULISES LÓPEZ SÁNCHEZ,** Perito Médico Legista, adscrito al Departamento de Medicina Legal de la Dirección de Servicios Periciales, de la Fiscalía General de Justicia del Estado, se desprende que al examen médico presentó: Equimosis roja de cuatro por tres (4x3) de forma irregular, situada en región frontal izquierda, zona descubierta de pelo. Área con dos escoriaciones de uno por uno (1X1) centímetros, situada en cara posterior de codo derecho. Equimosis roja de seis por cuatro (6X4) centímetros, de forma irregular, situada en cara lateral derecha de cuello, sus tres tercios. Equimosis roja de seis por seis (6X6) centímetros, situada en cara superior y externa de hombro derecho, que se clasificaron como **lesiones que no ponen en peligro la vida; tardan menos de quince días en sanar; tienen una evolución clínica de menos de veinticuatro (24) hora, estas al momento de la revisión y, se reservan las consecuencias médico legales.**

126. Del Certificado Médico de Lesiones practicado a las 25:25 horas del 20 de septiembre de 2019, al **A1** expedido por la **DRA. NANCY NALLELY GUTIERREZ FLORES**, Perito Médico legista adscrita a la Dirección General de Servicios periciales, expedido en fecha 30 de septiembre de 2019, se describen las lesiones que presentó **A1**, como Equimosis morada de 4X3 cm. de forma irregular, situada en región frontal izquierda, parte descubierta de pelo; Escoriación tipo rasguño con costra hemática seca, que mide 30X3 cm milímetros, situada en región frontal derecha, parte descubierta de pelo. Equimosis morada; Equimosis morada, que mide 5X4 cm. de forma irregular, situada en cara lateral derecha, tercio proximal de cuello; Equimosis morada, que mide 3X3 cm. situada en cada superior de hombro derecho; Área con dos excoriaciones que mide 1X1 cm cada una de ellas situadas en cada en codo derecho; Se observa desviación de dorso de nariz con edema postraumático leve, con dolor al tacto, sin crepitaciones. Examen en el que concluye que son lesiones de las que **no ponen en peligro la vida; tardan menos de 15 días en sanar; y presenta una evolución clínica de 2 a 3 días al momento de la revisión.**

127. También del certificado Médico de Lesiones practicado a la 15:00 horas del día 23 de octubre de 2019, a **A1** por la **DRA. NANCY NALLELY GUTIÉRREZ FLORES**, Perito Médico Legista, adscrita a la Dirección General de Servicios Periciales, de fecha 17 de octubre de 2019, se certificó que el agraviado presentaba las siguientes lesiones: Equimosis morada verdosa que mide cuatro por tres (4X3) centímetros, situada en dorso de nariz con deformidad de la misma, al tacto con dolor y sangrado activo. Refiere dolor en mano izquierda sin lesiones externas. **CONCLUSIONES:** son lesiones de las que: No ponen en peligro la vida. Tardan menos de quince días en sanar. Se reservan las consecuencias médico legales.

128. Ahora bien, de las evidencias anteriores, no se advierte que **A1,** previo a ser detenido por los elementos de Seguridad Pública Municipal de Zacatecas, presentara o tuviera lesiones perceptibles en su cuerpo, por lo que, los certificados médicos de Lesiones practicados por el **DR. FELIPE JOSÉ CARMONA BORJON,** Médico de Guardia adscrito a la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Zacatecas, a las 21:47 horas, del 18 de septiembre de 2019, así como los que realizaron los **CC. DR. CHRISTIAN ULISES LÓPEZ SÁNCHEZ** y **DRA. NANCY NALLELY GUTIERREZ FLORES**, los días 19 y 20 de septiembre de 2019 y 17 de octubre de 2019, respectivamente, por los Peritos Médicos Legistas adscritos a la Dirección General de Servicios Periciales, son suficientes y bastantes para demostrar que **A1,** posterior a su detención, presentó las lesiones en región frontal, cuello, hombro derecho, codo derecho y deformación en dorso de nariz. Los cuales le causaron un daño en su cuerpo. Mismas que, al ser examinadas en fecha 19 y 20 de septiembre de 2019, por la naturaleza de las mismas y el tiempo de evolución, coinciden con la fecha de su detención.

129. De la misma manera, existen pruebas contundentes para comprobar que esas lesiones le fueron infringidas en el proceso de su detención y traslado, por parte de los elementos de Seguridad Pública Municipal de Zacatecas. Lo anterior, encuentra sustento en la propia

declaración del agraviado **A1,** quien afirmó que una vez que se tiró al suelo los oficiales **JOSÉ GUADALUPE HERNÁNDEZ** y **JUAN MANUEL REVILLA LÓPEZ,** le propinaron golpes con los pies en su cabeza pegándole también en la nariz y en su cuerpo, que posteriormente ambos oficiales le pusieron cada uno un par de esposas que le apretaron fuertemente, y que le pisaban su cabeza.

130. Lo anterior, encuentra respaldo con lo expuesto dentro de la carpeta de investigación número […], por **T4,** persona que fue perseguida y detenida junto con el agraviado el día de los hechos, quien manifestó que a su amigo **A1,** lo comenzaron a golpear y a patear en la cabeza los elementos de la Dirección de Seguridad Pública y que cuando los trasladaron a la Policía Ministerial, al ir en el camino, a éste le seguían pisando la cabeza y golpeándolo.

131. En adición, de los oficios de puesta a disposición al Ministerio Público, así como de las constancias que obran en autos, se desprende que los elementos que ponen a disposición a los detenidos **A1** y **T4**, que son las dos personas que descienden del cerro de Las Bolsas, son **JOSÉ PÉREZ GONZÁLEZ** y **JOSÉ GUADALUPE HERNÁNDEZ.** De estos, se desprende que **A1** fue detenido por **JOSÉ GUADALUPE HERNÁNDEZ** a las 21:17 horas y, **T4**, por el oficial **JOSÉ PÉREZ GONZÁLEZ** también a las 21:17 horas. Lo que indica que, **A1** y **T4,** fueron detenidos al mismo tiempo cuando descienden del cerro de Las Bolsas, por los citados oficiales de Seguridad Pública Municipal, y por tanto **T4** presenció directamente por sus propios sentidos la agresión que sufrió su compañero **A1.**

132. Asimismo, con lo señalado por el **C. HUGO ISAÍ BARRIOS SALDAÑA**, Elemento de la Policía Preventiva Municipal, quien también niega haber participado en la detención de **A1,** afirmando que lo detuvieron **JOSÉ GUADALUPE HERNÁNDEZ** y **JUAN MANUEL REVILLA LÓPEZ,** quienes los tenían detenidos en el piso boca abajo, que él se acercó y como no estaban esposados, él sacó sus candados y se los colocaron, pero que no vio en ese momento si estaban golpeados, sino hasta que comenzaron a hacer la revisión, se percató de que **A1** traía lesiones en el rostro, y que alrededor de 3 o 4 horas que permaneció con los detenidos vio que éste, ya estaba hinchado y con líquido hemático en el rostro.

133. Por lo que, aun y cuando el propio Comandante **JOSÉ GUADALUPE HERNÁNDEZ,** de la Policía Preventiva Municipal, niegue que él y sus compañeros hayan golpeado al agraviado **A1,** refiriendo que quienes lo detuvieron fueron los oficiales de la sección que estaba trabajando en turno, del que recuerda al oficial número 700, a quien en su aseguramiento sólo apoyó a sujetarlo para colocarle los candados y subirlo a la patrulla, sin que observara al agraviado golpeado, ni sangre en el rostro, corroboró, que una hora y media o dos horas después, aproximadamente, cuando le hablaron para que los apoyara a ponerlo a disposición, vio al agraviado **A1,** golpeado, con una lesión en el rostro, en la frente y una inflamación tipo chichón enrojecido, pero no le vio liquido hemático.

134. Medios de prueba suficientes para demostrar que **A1,** sufrió un daño físico en su integridad corporal una vez que fue detenido, estando en poder y bajo la responsabilidad de los elementos de la Policía Preventiva Municipal de Zacatecas, en el proceso de su detención y traslado a la Dirección de Policía de Investigación, como lo sufrió el propio agraviado en su cuerpo, acción que desde luego fue observada por el testigo presencial de los hechos **T4,** al momento de su realización.

135. Y sobre todo, de la apreciación que de dicho daño tuvieron los oficiales de la citada corporación, a los **CC. HUGO ISAÍ BARRIOS SALDAÑA** y **JOSÉ GUADALUPE HERNÁNDEZ,** quienes si bien, niegan ellos haber detenido y golpeado al agraviado, sí reconocen no haberlo visto golpeado inicialmente en su detención y, posteriormente, aceptan haberlo observado con las lesiones citadas.

136. No obstante, de que, **JUAN MANUEL REVILLA LÓPEZ,** sólo acepte su intervención en el apoyo que les brindó a los oficiales **584** y a **JOSÉ GUADALUPE HERNÁNDEZ**, a subirlo a la unidad, señalando que él no se dio cuenta de que el agraviado trajera lesiones, y que, la detención de **A1,** la realizaron los policías **JOSÉ GUADALUPE HERNÁNDEZ, el**

oficial 700 y el 584, a los que observó, que lo tuvieron como cinco minutos en el suelo esposado.

137. Puesto que, aun y cuando los oficiales **CC. JUAN MANUEL REVILLA LÓPEZ** y **JOSÉ GUADALUPE HERNÁNDEZ,** no reconozcan haber participado en la detención del agraviado **A1,** como lo aseveran los elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal **CC. JUAN CARLOS VILLAGRANA GONZÁLEZ** y **HUGO ISAÍ BARRIOS SALDAÑA,** sí aceptan y reconocen ambos, que intervinieron apoyando en su aseguramiento para colocarle los candados de mano y para subirlo a la unidad para su traslado.

138. Como se puede observar, existe divergencia entre los hechos manifestados por los elementos **JUAN MANUEL REVILLA, JOSÉ PÉREZ** y **JOSÉ GUADALUPE HERNÁNDEZ**, en el sentido de que solo apoyaron a sujetarlos posterior a que ya habían sido detenidos por los **oficiales número 584** y **número 700**. Sin embargo, el primero de ellos, que responde al nombre de **GREGORIO BRISEÑO RODRÍGUEZ,** mencionó que desconoce quién haya realizado la detención. Mientras que, el segundo, que responde al nombre de **HUGO ISAÍ BARRIOS SALDAÑA,** refiere que es falso que él haya detenido a los quejosos, aseverando que quien los detuvo, en un primer momento, fueron **JUAN MANUEL REVILLA, JOSÉ PÉREZ** y **JOSÉ GUADALUPE HERNÁNDEZ,** señalando, que al realizar la respectiva revisión de **A1,** se percató de que traía lesiones, pero que además, al permanecer en las instalaciones de policía de investigación en espera a que los oficiales captores regresaran y realizaran su respectiva puesta a disposición, cerca de dos a tres horas, como ya se expuso, observó las lesiones que presentaba el agraviado en el rostro y en la frente que aumentaban de volumen, como se robustece con las certificaciones médicas.

139. Situación la anterior, que aunada a las circunstancias de familiaridad de cuñados entre **JUAN MANUEL REVILLA LÓPEZ** y **JOSÉ GUADALUPE HERNÁNDEZ**, quienes son cuñados, y su relación de parentesco con **D2** y **X2**, quienes momentos antes de su detención le reclamaron al agraviado **A1,** un evento suscitado por él y sus amigos, con unos **M2** y **M3** jóvenes también conocidos y familiares de ellas y de los mismos oficiales preventivos, quienes hicieron una llamada telefónica frente a él, diciéndoles que le iban a mandar a la policía, provocó que, al ver que llegaba una patrulla, éstos se echaron a correr, siendo perseguidos por los policías de Seguridad Pública Municipal de Zacatecas, habiendo tenido participación al momento de su detención, precisamente éstos dos oficiales. Asimismo, no pasa desapercibido que, con anterioridad a los hechos, ya existían problemas o un conflicto personal entre el agraviado **A1,** y el policía **JUAN MANUEL REVILLA LÓPEZ**, como se desprende del señalamiento realizado tanto por el agraviado como por sus hermanas **Q1** y **T9**, se configuraba un motivo o razón para intervenir en la agresión hacia el detenido.

140. Mayormente que es el mismo detenido **A1,** quién conociendo bien a los citados oficiales, sin lugar a equivocarse, afirma que fueron ellos quienes una vez estando él tirado en el suelo, arremetieron contra su integridad, dándole golpes con los pies, produciéndole las lesiones que presentó en su cuerpo y que ya fueron descritas en los certificados médicos, aludidos en párrafos precedentes.

141. Con todo lo anterior, se acredita que **A1**, fue objeto de agresiones físicas por parte de los elementos de Seguridad Pública Municipal de Zacatecas, que realizaron su captura, entre ellos **JUAN MANUEL REVILLA LÓPEZ** y **JOSÉ GUADALUPE HERNÁNDEZ,** a quien el agraviado identifica como los servidores públicos que lo golpearon con sus pies dándole patadas en su integridad corporal, y a quienes menciona que los conoce perfectamente, sabiendo que éstos son cuñados entre sí, más aún, que se desprende su intervención en el parte de hechos, en el que se desglosa quienes fueron los participantes en la detención, y la afirmación que hacen respecto a su captura asimismo al momento de ratificar la puesta a disposición, en adición a lo afirmado por el oficial **HUGO ISAÍ BARRIOS SALDAÑA** y del relevante testimonio de **T4,** compañero del quejoso, detenido junto con él y por lo tanto testigo presencial de los hechos; lo cual, a criterio de este Organismo se traduce en un abuso de autoridad y en una conducta reprobable, ya que no se debe olvidar que, los servidores públicos deben observar “en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los

principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público."[30]

142. En ese contexto, esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, concluye que con su actuar, los elementos de la Dirección de Seguridad Púbica Municipal de Zacatecas, que agredieron y permitieron la agresión a **A1**, mismos que fueron los que intervinieron en su detención y apoyaron en su aseguramiento, traslado y puesta a disposición del Ministerio Público, entre los que se encontraban involucrados **JUAN MANUEL REVILLA, JOSÉ PÉREZ, JOSÉ GUADALUPE HERNÁNDEZ, GREGORIO BRISEÑO RODRÍGUEZ** y **HUGO ISAÍ BARRIOS SALDAÑA,** incurrieron en una conducta abusiva y arbitraria, violentando los derechos humanos a la integridad y seguridad personal, en relación con el derecho a la integridad física de **A1**, actuación que desde luego debe serles reprochable a título de responsabilidad administrativa.

143. No pasa desapercibido para este Organismo, que de autos se desprende el escrito de fecha 22 de enero de 2020, signado por el **C. JUAN MANUEL REVILLA LÓPEZ**, en su carácter de Policía Municipal de Zacatecas, presentando su renuncia con carácter irrevocable para que se dé por terminada su relación laboral y administrativa y se efectúe su baja correspondiente, que dirige el **P.P.A.F. JORGE EDUARDO MUÑOZ FRANCO**, entonces Director de Seguridad Pública Municipal de Zacatecas, copia que fuera recibida en fecha 23 de enero de 2020 por la Dirección de la citada corporación y en fecha 31 de enero de 2020 por el Departamento de Recursos Humanos y la Presidencia Municipal, respectivamente, según se advierte de los sellos fechadores.

144. Como también la copia del Memorándum con referencia […], que el **P.P.A.F. JORGE EDUARDO MUÑOZ FRANCO**, entonces Director de Seguridad Pública Municipal de Zacatecas, dirigió al **OF. HUGO ISAÍ BARRIOS SALDAÑA**, por el que le hace del conocimiento su baja del Grupo de Reacción Inmediata 2da. Célula y con la misma fecha su alta en la Policía Metropolitana, el 29 de noviembre de 2019.

145. No obstante lo anterior, no se cuenta documento alguno que justifique la rescisión laboral o la baja de la corporación del **C. JUAN MANUEL REVILLA LÓPEZ**, para demostrar que ha dejado de tener el carácter de servidor público y, por otra parte, la copia del Memorándum citado, sólo justifica que el **OF. HUGO ISAÍ BARRIOS SALDAÑA**, ya no se encuentra dentro del grupo de reacción inmediata 2da, célula, y fue incorporado a la Policía Metropolitana, el cual continúa siendo servidor público.

146. Además de que, en los hechos tanto en la violación de sus derechos a la legalidad y seguridad jurídica en relación al derecho a no ser objeto de detención arbitraria del agraviado **A1,** como en su derecho a la integridad y seguridad personal en relación con su derecho a la integridad física, intervinieron o participaron los demás elementos de Seguridad Pública Municipal que han sido señalados en el cuerpo de la presente recomendación.

VII. CONCLUSIONES DEL CASO.

1. Esta Comisión reprueba la actuación abusiva, excesiva y arbitraria de los elementos policiales en el desempeño de su función y rechaza la vulneración del derecho a la integridad y seguridad personal, en relación con el derecho a la integridad física, sufrida por **A1,** atribuible a los elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Zacatecas entre los que se encontraban **CC. JOSÉ GUADALUPE HERNÁNDEZ, JOSÉ PÉREZ GONZÁLEZ, JUAN MANUEL REVILLA LÓPEZ, GREGORIO BRISEÑO RODRÍGUEZ** y **HUGO ISAÍ BARRIOS SALDAÑA**; así como el quebranto del derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica en relación con el derecho a no ser objeto de detención arbitraria que sufrió **A1,** por los citados servidores públicos. Así como los demás actos realizados por **JUAN CARLOS VILLAGRANA GONZÁLEZ** y **JONATHAN EDUARDO JUÁREZ CABRAL,** respecto de los disparos de arma de fuego innecesarios realizados, así como los provenientes de la información otorgada por el primero de los citados que ocasionó la movilización policial

[30] Ley General de Responsabilidades Administrativas, http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGRA_120419.pdf, fecha de consulta 21 de mayo de 2019.

innecesaria y los actos de molestia ocasionados a los **T1, D1** y **X1**, por elementos policiales, derivada de la información proveniente del Comandante **JUAN CARLOS VILLAGRANA GONZÁLEZ**, y la derivada de dicha información realizada por los elementos policiales.

2. Se encuentra plenamente demostrado que **A1,** fue detenido arbitrariamente por elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Zacatecas, sin que se configurara ninguna de las hipótesis de flagrancia en la comisión del delito de disparo de arma de fuego que le fue atribuida por los citados servidores públicos.

3. Se demostró además que los **CC. JUAN CARLOS VILLAGRANA GONZÁLEZ** y **JONATHAN EDUARDO JUÁREZ CABRAL**, realizaron innecesariamente los disparos de arma de fuego, provocando con lo anterior y la información errónea, una inmovilización policial, que causó la detención arbitraria del agraviado y la molestia a sus familiares.

4. También se comprobó fehacientemente que el agraviado **A1,** sufrió un daño en su integridad física, por lo golpes que le propinaron en el proceso de su detención y traslado para ponerlo a disposición del Ministerio Público, por parte de los citados servidores públicos.

VIII. REPARACIONES.

1. De conformidad con lo establecido en los artículos 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 51 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, al acreditarse violación a los derechos humanos del **A1**, atribuible a servidores públicos del municipio de Zacatecas, la Recomendación formulada al respecto debe incluir las medidas que procedan para lograr la efectiva restitución de las personas afectadas en sus derechos.

2. Dichas reparaciones, de conformidad con los Principios y Directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, en su resolución aprobada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidad el 16 de diciembre de 2005, establece que “[u]na reparación adecuada, efectiva y rápida tiene por finalidad promover la justicia, remediando las violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos o las violaciones graves del derecho internacional humanitario.”[31] Para ello, “[l]a reparación ha de ser proporcional a la gravedad de las violaciones y al daño sufrido”[32]; esto es, “…una reparación plena y efectiva…”, “…en las formas siguientes: restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición.”[33]

A) La indemnización.

1. La indemnización es una medida compensatoria que busca reparar los perjuicios económicamente evaluables que sean consecuencia de las violaciones a derechos humanos, entre los que se incluyen: el daño físico o mental; la pérdida de oportunidades, en particular las de empleo, educación y prestaciones sociales; los daños materiales y la pérdida de ingresos, incluido el lucro cesante; los perjuicios morales; los gastos de asistencia jurídica o de expertos, medicamentos y servicios médicos, psicológicos y sociales.

2. La indemnización ha de concederse, de forma apropiada y proporcional a la gravedad de la violación y a las circunstancias de cada caso, por todos los perjuicios económicamente evaluables que sean consecuencia de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos o de violaciones graves del derecho internacional humanitario, tales como los siguientes:

a) El daño físico o mental;

---

[31] ONU Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, en su 60/147 Resolución aprobada por la Asamblea General el 16 de diciembre de 2005, http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/RemedyAndReparation.aspx, fecha de consulta 11 de julio de 2021, párr. 15.

[32] Ídem.

[33] Ibídem, párr. 18.

b) La pérdida de oportunidades, en particular las de empleo, educación y prestaciones sociales;
c) Los daños materiales y la pérdida de ingresos, incluido el lucro cesante;
d) Los perjuicios morales;
e) Los gastos de asistencia jurídica o de expertos, medicamentos y servicios médicos y servicios psicológicos y sociales.[34]

3. En el presente punto, la indemnización debe realizarse a favor de las víctimas directas de las violaciones a derechos humanos que se acreditaron en este caso, que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 4 fracción I y II, de la Ley de Atención a Víctimas del Estado de Zacatecas, correspondería al **A1**; para que éste sea beneficiario del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, presente en dicha ley.

B) De la rehabilitación.
1. Las medidas de rehabilitación buscan reducir los padecimientos físicos y psicológicos de las víctimas, a través del otorgamiento de servicios de atención médica, psicológica, jurídica y social que éstas requieran.

2. Por lo tanto, deberá brindarse la atención médica y psicológica que requiera el **A1**, con motivo de la agresión física que sufrió al momento de su detención por parte de los elementos de la Dirección de Seguridad Pública del municipio de Zacatecas.

C) De las medidas de satisfacción.
1. La satisfacción cuando sea pertinente y procedente, deberá incluir la totalidad o parte de las medidas siguientes:

a) Medidas eficaces para conseguir que no continúen las violaciones;
b) La verificación de los hechos y la revelación pública y completa de la verdad, en la medida en que esa revelación no provoque más daños o amenace la seguridad y los intereses de la víctima, de sus familiares, de los testigos o de personas que han intervenido para ayudar a la víctima o impedir que se produzcan nuevas violaciones;
c) La búsqueda de las personas desaparecidas, de las identidades de los niños secuestrados y de los cadáveres de las personas asesinadas, y la ayuda para recuperarlos, identificarlos y volver a inhumarlos según el deseo explícito o presunto de la víctima o las prácticas culturales de su familia y comunidad;
d) Una declaración oficial o decisión judicial que restablezca la dignidad, la reputación y los derechos de la víctima y de las personas estrechamente vinculadas a ella;
e) Una disculpa pública que incluya el reconocimiento de los hechos y la aceptación de responsabilidades;
f) La aplicación de sanciones judiciales o administrativas a los responsables de las violaciones;
g) Conmemoraciones y homenajes a las víctimas;
h) La inclusión de una exposición precisa de las violaciones ocurridas en la enseñanza de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, así como en el material didáctico a todos los niveles.[35]

2. Este Organismo considera que la autoridad a quien va dirigida la presente Recomendación, deberá instaurar un procedimiento interno en contra de los elementos de la Dirección de Seguridad Pública de Zacatecas, los **CC. JOSÉ GUADALUPE HERNÁNDEZ, JOSÉ PÉREZ GONZÁLEZ, JUAN MANUEL REVILLA LÓPEZ, GREGORIO BRISEÑO RODRÍGUEZ, HUGO ISAÍ BARRIOS SALDAÑA**, **JUAN CARLOS VILLAGRANA**

[34] Ibídem, párr. 20.
[35] Ibídem, párr. 22.

GONZÁLEZ y **JONATHAN EDUARDO JUÁREZ CABRAL,** realizando las investigaciones necesarias para determinar la responsabilidad administrativa de cada uno de ellos, y en su caso, sancionar a dichos servidores públicos por su correspondiente participación en los hechos.

D) Las garantías de no repetición.

1. Las garantías de no repetición son aquéllas que se adoptan con el fin de evitar que las víctimas vuelvan a hacer objeto de violaciones a sus derechos humanos y para contribuir a prevenir o evitar la repetición de actos de su misma naturaleza.

2. A fin de prevenir la violación de los derechos mencionados en párrafos precedentes, resulta indispensable que el H. Ayuntamiento de Zacatecas diseñe e implemente un mecanismo de formación y actualización continua en materia derechos humanos, en los que se aborden, de manera particular, el derecho a la legalidad y seguridad jurídica, en relación a no ser objeto de detención arbitraria; del derecho a la integridad y seguridad personales, en conexidad con el derecho a la integridad física, dirigido a elementos de la Dirección de Seguridad Pública de Zacatecas.

IX. RECOMENDACIONES.

Por lo anterior, y con fundamento en los 1 y 102 apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 2, 3, 4, 8, 17, 37, 51, 53, 54, 56, 57 y 58 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, se emiten las siguientes Recomendaciones:

PRIMERA. En el plazo máximo de un mes, contado a partir de la notificación de la presente Recomendación, se inscriba en el Registro Estatal de Víctimas, a **A1**, en su calidad de víctima directa de vulneración a sus derechos humanos, lo anterior, para garantizar que tengan un acceso oportuno y efectivo a las medidas de ayuda, asistencia, atención, acceso a la justicia y reparación integral previstas en la Ley de Atención a Víctimas del Estado de Zacatecas.

SEGUNDA. Dentro del plazo máximo de un mes, contado a partir de la aceptación de la presente Recomendación, se determine y valore la atención psicológica y médica que requiera **A1**, con motivo de las agresiones físicas sufridas en razón a su detención y, en el caso de ser su deseo, ésta le sea otorgada de manera gratuita hasta su total restablecimiento.

TERCERA. En un plazo máximo de tres meses, contados a partir de la aceptación de la presente Recomendación, se implementen programas de sensibilización y de capacitación a los elementos de Seguridad Pública Municipal, respecto de los derechos humanos a la integridad y seguridad personal en relación con el derecho a la integridad física y psicológica y del derecho a la legalidad y seguridad jurídica en relación con el derecho a no ser objeto de detención arbitraria, con las detenciones en flagrancia, y con sus atribuciones legales contempladas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Zacatecas, la Ley de las Instituciones Policiales de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas, Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Zacatecas, el Código Nacional de Procedimientos Penales, y los tratados internacionales en la materia, a efecto de evitar futuras violaciones a derechos humanos.

CUARTA. En un plazo máximo de un mes, contado a partir de la aceptación de la presente Recomendación, se inicien los procedimientos de responsabilidad correspondientes, a fin de que **CC. JOSÉ GUADALUPE HERNÁNDEZ, JOSÉ PÉREZ GONZÁLEZ, JUAN MANUEL REVILLA LÓPEZ, GREGORIO BRISEÑO RODRÍGUEZ, HUGO ISAÍ BARRIOS SALDAÑA**, **JUAN CARLOS VILLAGRANA GONZÁLEZ** y **JONATHAN EDUARDO JUÁREZ CABRAL** servidores públicos responsables de las violaciones a los derechos humanos señalados, sean debidamente sancionados y, se envíen las constancias correspondientes del cumplimiento de las sanciones impuestas.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 53, párrafo segundo de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, se hace del conocimiento de la autoridad a la que va dirigida esta Recomendación, que dispone de un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente en que ésta se le notifique, para que manifieste si la acepta o no, en el entendido de que, de no aceptarla, su respuesta se hará del conocimiento de la opinión pública. En caso de que la acepte, se le notifica que dispone de un plazo de 15 días, contados a partir del vencimiento del término del que disponía para responder sobre la aceptación, a fin de enviar las pruebas de su cumplimiento.

Por último, hágasele saber a la parte quejosa que, de conformidad con el artículo 61 de la Ley de este Organismo, dispone de 30 días naturales, computados a partir de la fecha de notificación del presente documento, para que en caso de que exista inconformidad con la misma, interponga el recurso de impugnación correspondiente ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Así lo resolvió y firma la Dra. en D. Ma. de la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas.

Así lo determina y firma

DRA. EN D. MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOS
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE ZACATECAS.

Expediente: CDHEZ/270/2020

Persona quejosa: Q1.

Persona agraviada: Q1.

Autoridades responsables:

I. Lic. Perla Angélica Vargas Ramírez, Jueza Comunitaria adscrita a la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Zacatecas.
II. Lic. Pascual Vázquez Pérez, Fiscal del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas.
III. C. Gerardo Guadalupe Campos Alanis, Comandante de guardia de la Dirección General de la Policía de Investigación, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas.

Derechos Humanos vulnerados:

I. Derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica, en relación con el derecho de acceso a la justicia.

Zacatecas, Zac., a 02 de septiembre de 2021, una vez concluida la investigación de los hechos que motivaron el expediente **CDHEZ/270/2020**, y analizado el proyecto presentado por la Primera Visitaduría General, la suscrita aprobó, de conformidad con los artículos 4, 8, fracción VIII, 17 fracción V, 37, 51, 53 y 56 de la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, en relación con lo dispuesto por los numerales 161 fracción X, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 y 175 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, vigente al momento de los hechos, la **Recomendación 48/2021** que se dirige a las autoridades siguientes:

DR. FRANCISCO JOSÉ MURILLO RUISECO, Fiscal General de Justicia del estado de Zacatecas, por los hechos atribuidos al **LIC. PASCUAL VÁZQUEZ PÉREZ,** Fiscal del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, así como al **C. GERARDO GUADALUPE CAMPOS ALANIZ**, Comandante de Guardia de la Dirección General de la Policía de Investigación.

MTRO. SALVADOR ESTRADA GONZALEZ, Presidente Municipal de Zacatecas, por las actuaciones realizadas por la **LIC. PERLA ANGÉLICA VARGAS RAMÍREZ**, Juez Comunitaria adscrita a la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Zacatecas.

R E S U L T A N D O:

I. DE LA CONFIDENCIALIDAD.

1. De conformidad con los artículos 6º, apartado A, fracción II y 16, párrafo segundo, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en relación con los artículos 23 y 85 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, los datos personales de las partes, relacionados con esta resolución, permanecerán confidenciales, ya que sus datos personales, así como aquellos relativos a su vida privada y familiar, no tienen el carácter de públicos.

2. Asimismo, en términos de lo dispuesto por los artículos 4º, párrafo noveno, 6º, fracción II, y 16, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 16 de la Convención de los Derechos del Niño, los nombres, apellidos y demás datos personales de los niños vinculados con los hechos de la presente resolución, se mantienen bajo la más estricta confidencialidad, en pleno respeto a su derecho a la intimidad y vida privada.

II. RELATORÍA DE LOS HECHOS Y OBJETO DE LA CONTROVERSIA.

1. El 23 de junio de 2020, **Q1,** presentó queja, en contra de elementos de Seguridad Pública del municipio de Zacatecas, Juez Comunitaria adscrita a dicha dependencia Municipal de Zacatecas. Asimismo, en contra del **LIC. PASCUAL VÁZQUEZ PÉREZ,** Fiscal del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, por actos presuntamente violatorios de sus derechos humanos, de conformidad con los artículos 30, 31 y 32 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas.

Por razón de turno, el 24 de junio de 2020, se remitió el escrito de queja a la Primera Visitaduría, bajo el número de expediente citado al rubro, a efecto de formular el correspondiente acuerdo de calificación, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 123 y 124 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, vigente al momento de los hechos.

El 24 de junio de 2020, la queja se calificó como pendiente en términos de lo dispuesto en el artículo 124 fracción III, del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, por considerarse necesaria la aclaración de algunos puntos de la misma.

En virtud de lo anterior y acorde a lo estipulado por el 44 de la Ley que rige el actuar de este Organismo Estatal, en fecha 24 de junio de 2020, se citó a **Q1**, para la aclaración de su escrito inicial de queja. El 01 de julio 2020 atendió el citatorio y precisó los hechos denunciados.

El 03 de julio de 2020 la queja se calificó como presunta violación al derecho a la legalidad y seguridad jurídica, en relación con el derecho de acceso a la justicia, de conformidad con lo establecido por el artículo 56, fracción I, del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas.

2. Los hechos materia de la queja consistieron en lo siguiente:
Q1 denunció que, en fecha 30 de julio de 2019, su esposa se encontraba en el interior de su domicilio lesionando a **M1**, que es hijo de ambos, y a la hija de ésta, a la cual estaba ahorcando. Motivo por el cual, otro hijo de la quejosa, **M2**, llamó al 911, acudiendo elementos de la Dirección de Seguridad Pública del municipio de Zacatecas, quienes se la llevaron a la Dirección de la citada corporación, sin ponerla a disposición del Ministerio Público, argumentando que éste no se las había querido recibir, y por ello sólo le impusieron un arresto administrativo. Señala además que el Ministerio Público manifestó, que nunca se la presentaron; omisiones que señala son violatorias de derechos humanos, pues consideró que tiene derecho a que se le administrara justicia pronta y expedita.

III. COMPETENCIA.

1. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas es competente, en los términos de los artículos 1º, 4º, 6º, 8º fracción VII, inciso A) y 31 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, en relación con los numerales 15, 22 y 23 de su Reglamento Interno, vigente al momento de los hechos, en razón de que la queja se promueve en contra de servidores públicos del municipio de Zacatecas y de esta esta entidad, por hechos ocurridos en julio de 2019.

2. De conformidad con los artículos 123 y 124 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, este Organismo advirtió que de los hechos se pudo presumir la violación a los derechos humanos del **Q1,** así como la responsabilidad por parte de los elementos de la Dirección de Seguridad Pública del municipio de Zacatecas, de la Juez Comunitaria, adscrita a la Dirección de Seguridad Pública Municipal y del Fiscal del Ministerio Público, de la Fiscalía General de Justicia del Estado, que participaron en los hechos.

3. Esta Comisión presumió la violación a los siguientes derechos:
a) Derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica, en relación con el derecho de acceso a la justicia.

IV. PROCEDIMIENTO ANTE LA COMISIÓN.

Con la finalidad de documentar las presuntas violaciones a derechos humanos, así como para determinar la existencia o no de responsabilidad por parte de los elementos de la Policía de Seguridad Preventiva Municipal de Zacatecas, de la Juez Comunitaria, adscrita a la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Zacatecas y del Fiscal del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado, este Organismo realizó entrevistas a las personas relacionadas con los hechos y se solicitaron informes a las autoridades señaladas como responsables, así como demás diligencias necesarias para emitir la resolución correspondiente.

V. PRUEBAS.

Con base en lo estipulado en los artículos 48 y 49 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, en relación con los numerales 150, 151, 152, 153 y 154 del Reglamento Interno de este Organismo, durante el procedimiento realizado por esta Institución, se recabaron los elementos probatorios documentales, remitidos tanto por la parte agraviada como por las autoridades señaladas como responsables, así como las colaboraciones necesarias para emitir la presente Recomendación.

VI. SOBRE LOS DERECHOS VULNERADOS.

A <u>Derecho a la legalidad y seguridad jurídica, en relación con el derecho de acceso a la justicia.</u>

1. La seguridad jurídica se traduce en la certeza, protección y claridad de las normas jurídicas y de su aplicación. Es decir, gracias a ella, las personas tenemos la certidumbre de que nuestra situación jurídica, posesiones o derechos solo serán modificados por los procedimientos legales previamente establecidos. Para ello, autores como Rigoberto Ortiz Treviño, refieren que deben cumplirse cuatro condiciones para que se cumpla la seguridad jurídica I) que el derecho este formalizado II) que este no sea objeto de interpretaciones arbitrarias, III) que sea eficaz y IV) que sea estable.[1]

2. El derecho a la seguridad jurídica otorga primacía al derecho a la legalidad, ya que, de conformidad con éste, todo acto de autoridad debe estar fundamentado en una ley la cual debe estar armonizada con los derechos humanos reconocidos por nuestro país. De ahí. que éstas solo pueden hacer aquello para lo que estén facultados expresamente en la normatividad legal, a fin de brindar seguridad y certeza jurídica a las personas. Ya que así, incide sobre el poder público para impedir la arbitrariedad o discrecionalidad de las autoridades y personas que ejercen servicios públicos.[2]

---

[1] ORTIZ Treviño, *La Seguridad Jurídica. Los Derechos Humanos en la Jurisprudencia Mexicana*. Comisión Nacional de los Derechos Humanos, México, octubre de 2004, págs. 215 y 126.
[2] CARBONELL Miguel, Los derechos fundamentales en México, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Universidad Autónoma de México, 2004, págs. 585-589

3. La interdependencia existente entre el derecho a la seguridad jurídica y a la legalidad es tal, que sus elementos dan sentido a los contenidos de ambos. Así, mientras la seguridad jurídica nos permite conocer nuestros derechos y obligaciones de modo claro y preciso, el principio de legalidad requiere que todo acto destinado a producir efectos jurídicos debe tener como base una disposición y un procedimiento legal. En este sentido, el Tribunal Constitucional Español ha señalado que la seguridad jurídica es la suma de principios como el de legalidad, publicidad de las normas, irretroactividad de la ley, entre otros, de tal suerte que permite promover la justicia y la igualdad.[3]

4. En el Sistema Universal de Derechos Humanos, el derecho a la legalidad y seguridad jurídica y al acceso a la justicia, se encuentran reconocidos tanto en los artículos 8 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos[4], como en el artículo 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Humanos Civiles y Políticos[5], al señalarse los derechos a un recurso efectivo que tiene toda persona, ante los tribunales competentes que la amparen contra actos que violen sus derechos fundamentales, reconocidos legalmente y de ser escuchado públicamente, en condiciones de plena igualdad y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones.

5. Por su parte, en el Sistema Interamericano, tanto las garantías judiciales como la protección judicial, consagran ambos derechos, en el mismo sentido, en los artículos 8.1, y 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[6], así como el principio XVIII, de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, contempla que toda persona puede acudir a los Tribunales a hacer valer sus derechos y disponer de un procedimiento sencillo y breve, por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen en su perjuicio los derechos fundamentales, previstos en la ley y en la Constitución.

6. En nuestro Sistema Jurídico Nacional, el derecho a la seguridad jurídica y el principio de legalidad se encuentran consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al proteger la libertad y seguridad de las personas, a partir de la exigencia de que, todos los actos de autoridad que causen sobre estas molestias en ellas, papeles o posesiones, deben estar debidamente fundados y motivados. Es decir, las autoridades solo podrán hacer aquello para lo que están expresamente facultadas y obligadas en una ley y, todo acto o procedimiento por el cual se interfiera en la esfera jurídica de un gobernado, debe estar previsto en una norma legal.

7. De igual forma, el derecho al acceso a la justicia se contempla en el artículo 17 Constitucional, ante el reconocimiento del derecho de las personas a que se administre justicia por los tribunales expeditos para tal efecto, prohibiendo, por tanto, que las personas se hagan justicia por sí mismas o para reclamar su derecho o ejerzan violencia. Además de que el artículo 21 de esta máximo Ordenamiento, otorga la atribución al Ministerio Público y a las Policías bajo el mando de aquél para la investigación de los delitos.

8. Por lo que, en un Estado de Derecho, es un principio básico la observancia de la Ley y la condición que da certeza a las personas, de que los servidores públicos no pueden actuar discrecionalmente, toda vez que su actuación se encuentra sujeta a un marco jurídico legal que contempla sus atribuciones, conforme al cual se encuentran obligados sus funciones.

9. En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado, a través de la Tesis Aislada con registro 2005766, que el principio de legalidad constituye una garantía del derecho humano a la seguridad jurídica, consistente en que las autoridades solo pueden hacer aquello para lo que están expresamente facultadas por la ley. De ahí

---

[3] STC27/1981, de 20 de julio de 1981, publicada en el BOE n°193, de 13 de agosto de 1981.
[4] Cfr. con el contenido del artículo 18 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
[5] Cfr. con el contenido de artículo 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
[6] Cfr. con el contenido del artículo 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

que, aquellos actos realizados por éstas, sin el amparo de una facultad expresa, se considerarán arbitrarios.

> Época: Decima Época
> Registro: 2005766
> Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
> Tipo de Tesis: Aislada
> Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
> Libro 3, Febrero de 2014, Tomo III
> Materia(S): Constitucional
> Tesis: IV 2°A5. 1k (10a)
>
> PRINCIPIO DE LEGALIDAD CARACTERÍSTICAS DE SU DOBLE FUNCIONALIDAD TRATÁNDOSE DEL ACTO ADMINISTRATIVO Y SU RELACIÓN CON EL DIVERSO DE INTERDICCIÓN DE LA ARBITRARIEDAD Y EL CONTROL JURISDICCIONAL
>
> Del artículo 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierten los requisitos de mandamiento escrito, autoridad competente y fundamentación y motivación, como garantías instrumentales que, a su vez, revelan la adopción en el régimen jurídico nacional del principio de legalidad, como una garantía del derecho humano a la seguridad jurídica, acorde al cual las autoridades solo pueden hacer aquello para lo que expresamente les facultan las leyes, en el entendido de que estas, a su vez, constituyen la manifestación de la voluntad general. Bajo esa misma premisa, el principio mencionado tiene una doble funcionalidad, particularmente tratándose del acto administrativo, pues, por un lado, impone un régimen de facultades expresas en el que todo acto de autoridad que no represente el ejercicio de una facultad expresamente conferida en la ley a quien lo emite, se considerara arbitrario y, por ello, contario al derecho a la seguridad jurídica, lo que legitima a las personas para cuestionar la validez de un acto desajustado a las leyes, pero, por otro, bajo la adopción del mismo principio como base de todo el ordenamiento, se genera la presunción de que toda actuación de la autoridad deriva del ejercicio de una facultad que la ley le confiere, en tanto no se demuestre lo contrario, presunción de legalidad, ampliamente reconocida tanto en la doctrina como en la legislación nacional. Así el principio de legalidad, apreciado en su mayor amplitud, da cabida al diverso de interdicción de la arbitrariedad, pero también conlleva que este opere a través de un control jurisdiccional, lo que da como resultado que no basta que el gobernado considere que determinado acto carece de fundamentación y motivación para que lo estime no obligatorio ni vinculante o lo señale como fuente de un derecho incontrovertible a una sentencia que lo anule, sino que en todo caso, está a su cargo recurrir a los órganos de control a hacer valer la asumida ausencia o insuficiencia de fundamento legal y motivación dentro de dicho procedimiento y, a su vez, corresponda a la autoridad demostrar que el acto cuestionado encuentra sustento en una facultad prevista por la norma, so pena de que sea declarado contrario al derecho a la seguridad jurídica, lo que revela que los procedimientos de control jurisdiccional, constituyen la última garantía de verificación del respeto al derecho a la seguridad jurídica, cuyas reglas deben ser conducentes y congruentes con ese propósito
>
> SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.

10. Asimismo, el citado máximo Tribunal Mexicano, ha establecido los alcances de la garantía de seguridad jurídica, en la siguiente jurisprudencia constitucional, de la siguiente manera:

> “GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA, SUS ALCANCES. La garantía de seguridad jurídica prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no debe entenderse en el sentido de que la ley ha de señalar de manera especial y precisa un procedimiento para regular cada una de las relaciones que se entablen entre las autoridades y los particulares, sino que debe contener los elementos mínimos para hacer valer

> el derecho del gobernado y para que, sobre este aspecto, la autoridad no incurra en arbitrariedades, lo que explica que existen trámites o relaciones que por su simplicidad o sencillez no requieren de que la ley pormenorice un procedimiento detallado para ejercer el derecho correlativo. Lo anterior corrobora que es innecesario que en todos los supuestos de la ley se deba detallar minuciosamente el procedimiento, cuando éste se encuentra definido de manera sencilla para evidenciar la forma en que debe hacerse valer el derecho por el particular, así como las facultades y las obligaciones que le corresponden a la autoridad."
>
> SEGUNDA SALA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, OCTUBRE 2006, REGISTRO 174094.

11. En razón de lo anterior, la legalidad y seguridad jurídica conllevan la existencia de normas jurídicas que establezcan, por un lado, claramente los derechos y obligaciones de las personas y por el otro, las atribuciones de las autoridades para actuar en determinado sentido y mediante el cumplimiento de procedimientos previamente definidos. En adición, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que la garantía de legalidad se cumple con la existencia constatada de los hechos que permitan deducir la procedencia de la aplicación de la norma correspondiente y que se justifique que la autoridad haya actuado en tal sentido y no en otro, como se hace evidente en la siguiente jurisprudencia:

> Época: Novena Época
> Registro: 192076
> Instancia: Pleno
> Tipo de Tesis: Aislada
> Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
> Tomo XI, Abril de 2000I
> Materia(S): Constitucional
> Tesis: P/J.50/2000
> Página 813
>
> FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN SU CUMPLIMIENTO CUANDO SE TRATE DE ACTOS QUE NO TRASCIENDAN, DE MANERA INMEDIATA, LA ESFERA JURÍDICA DE LOS PARTICULARES.
>
> Tratándose de actos que no trasciendan de manera inmediata la esfera jurídica de los particulares, sino que se verifican solo en los ámbitos internos del gobierno, es decir entre autoridades, el cumplimiento de la garantía de legalidad tiene por objeto que se respete el orden jurídico y que no se afecte la esfera de competencia que corresponda a una autoridad, por parte de otra u otras. En este supuesto; la garantía de legalidad y concretamente, la parte relativa a la debida fundamentación y motivación, se cumple: a) Con la existencia de una norma legal que atribuya a favor de la autoridad, de manera nítida, la facultad para actuar en determinado sentido, y, asimismo, mediante el despliegue de la actuación de esa misma autoridad en la forma precisa y exacta en que lo disponga la ley, es decir, ajustándose escrupulosa y cuidadosamente a la norma legal en la cual encuentra su fundamento la conducta desarrollada; y b) Con la existencia constatada de los antecedentes facticos o circunstancias de hecho que permitan colegir con claridad que si procedía aplicar la norma correspondiente y, consecuentemente, que justifique con plenitud el que la autoridad haya actuado en determinado sentido y no en otro. A través de la primera premisa, se dará cumplimiento a la garantía que debida fundamentación y, mediante la observancia de la segunda, a la de debida motivación.

12. En el marco jurídico local, el artículo 31 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, contempla el derecho al acceso a la justicia, señalando que ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho, y reconoce también el derecho de toda persona a que se le administre justicia por los tribunales del Estado mismos que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos legales. Asimismo, respecto de la justicia administrativa, el séptimo párrafo del numeral 32 del citado Ordenamiento, señala la obligación para

quien efectúe la detención, de poner a disposición de la autoridad competente a la persona detenida, en un plazo de tres horas, la cual fijará en un plazo que no exceda de dos horas, la sanción alternativa correspondiente. Además los artículos 150, fracción III y 154 de la citada Constitución, establecen que los servidores públicos de la entidad tienen la obligación de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficacia y eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos y comisiones, y en el caso de que sus actos u omisiones afecten, el cumplimiento de dichos principios, se aplicaran las sanciones administrativas correspondientes, por incurrir en violaciones, al principio de legalidad al no ceñir sus actuaciones a lo que la ley permite u ordena.

13. Si las personas no pueden acceder a la justicia, no pueden hacer oír su voz, ejercer de manera plena y eficaz sus derechos, ni hacer frente a la discriminación. La Declaración de la Reunión de Alto Nivel sobre el Estado de Derecho, en los planos Nacional e Internacional[7], hizo hincapié en el derecho a la igualdad de acceso a la justicia para todos, incluidos los miembros de grupos vulnerables, y reafirmó el compromiso de los Estados Miembros de adoptar todas las medidas necesarias para prestar servicios justos, transparentes, eficaces, no discriminatorios y responsables que promovieran el acceso a la justicia para todos, entre ellos la asistencia jurídica.[8] En ese orden de ideas, gracias a la dinámica actual del derecho internacional de los derechos humanos, el *corpus iuris* internacional ha permitido establecer diversos aspectos del derecho al acceso a la justicia. De esta manera, hoy en día son varios los instrumentos internacionales, particularmente tratados y declaraciones, los que hacen alusión a este derecho, ya sea de manera general, indicando sus elementos mínimos, o desarrollando su contenido, de acuerdo con el estatus jurídico de su titular.

14. Adicionalmente, el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, estatuye en su artículo 1°, la igualdad de todas las personas ante tribunales y cortes de justicia nacionales y, de la misma manera, indica que, en caso de enfrentar una acusación penal, toda persona deberá ser oída siguiendo el principio de publicidad y con irrestricto respeto a las garantías legales, por un tribunal previamente establecido, independiente e imparcial; garantías que deben respetarse de igual forma, para la determinación de derechos u obligaciones en materia civil.

15. Aunado a ello, el artículo 4° de la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y Abusos del Poder[9], así como en los numerales 10 y 12 de los Principios y Directrices Básicos sobre el Derecho de las Víctimas de Violaciones manifiestas de las Normas Internacionales de Derechos Humanos y de Violaciones Graves del Derecho Internacional Humanitario, a interponer Recursos y obtener Reparaciones[10], estipulan de manera genérica que, las víctimas de delitos, deberán ser tratadas con pleno respeto a su dignidad y gozarán del derecho de acceso a la justicia y de una pronta reparación del daño, según lo dispongan las legislaciones internas.

16. Mientras tanto, en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, del cual forma parte el Estado Mexicano, el numeral XVIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, estipula que, ante la necesidad de hacer valer sus derechos, toda persona podrá acudir ante los tribunales, disponiendo para ello de un procedimiento sencillo y breve, a fin de ser amparado por la justicia contra actos de la autoridad que violen, en su perjuicio, cualquiera de los derechos fundamentales reconocidos constitucionalmente.

17. Se advierte entonces que, el derecho de acceso a la justicia es un derecho fundamental amplísimo y que los Estados están obligados a garantizarlo para todos los gobernados. Específicamente, en la materia penal, constituye un sistema de contrapesos en el cual, los aparatos jurisdiccionales deben equilibrar los derechos de las víctimas y/u ofendidos del delito, y los de las personas imputadas para, dentro de la

---

[7] Resolución aprobada por la Asamblea General el 24 de septiembre de 2012
[8] Declaración de la Reunión de Alto Nivel sobre el Estado de Derecho, en los planos Nacional e Internacional, párr. 14 y 15.
[9] Adoptada por la Asamblea General en su resolución 40/34, de 29 de noviembre de 1985.
[10] Ídem.

línea trazada por los tribunales internacionales y en estricto apego al debido proceso legal, impartir justicia dentro de términos procesales razonables establecidos en las legislaciones internas; justicia que, además, deberá ser imparcial, gratuita, expedita y completa.

18. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en nuestro País, ha definido el derecho al acceso a la justicia, como un derecho público subjetivo, que toda persona tiene para acceder a los tribunales con el objetivo de plantear una prestación o defenderse de ella, con el fin de que, a través de un proceso, en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión[11].

19. Así las cosas, la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, impone al Ministerio Público, la obligación de velar por la legalidad, actuando con estricto apego al orden jurídico y respeto a los derechos humanos, en ejercicio de sus funciones con igualdad y no discriminación a persona alguna, procurando que los juicios en materia penal se sigan con toda regularidad para que la procuración e impartición de justicia sea eficaz, imparcial, pronta y expedita, cumpliendo con diligencia en tiempo y forma, con la función de investigación y persecución del delito.

20. Por otro parte, el artículo 42 de la Ley de Justicia Comunitaria del Estado de Zacatecas, impone la obligación al Juez Comunitario, para remitir los hechos que puedan constituir delito, al Ministerio Público, cuando de ello tenga conocimiento con motivo de sus funciones, poniendo inmediatamente a su disposición a la persona detenida.

21. El señor **Q1** consideró perjudicial en sus derechos humanos, la función desempeñada por elementos de la Policía Preventiva y de la Juez Comunitaria, adscritos a la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Zacatecas, así como del **LIC. PASCUAL VÁZQUEZ PÉREZ**, en su carácter de Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en la Recepción de Detenidos, quien actualmente se desempeña como Agente del Ministerio Público número Dos, adscrito a la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, Tortura y otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes, al estimar que. su actuar no fue conforme a derecho, por las irregularidades en que incurrieron, en la no presentación ni aceptación de la detenida que cometió el delito de violencia familiar en perjuicio de su familia, pues afirmó que en la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Zacatecas, le informaron que permanecieron en espera a que les recibieran a la detenida **D1**, pero que fueron informados por elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado, que no les recibirían a la detenida, por lo que la regresaron a los separos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Zacatecas, para dejarla arrestada solo por una falta administrativa, aun y cuando fue detenida en flagrancia por la comisión del delito de violencia familiar.

22. Esta Comisión Estatal de Derechos Humanos, una vez realizado el estudio de los motivos de inconformidad externados por el quejoso **Q1**, los informes que las autoridades presuntas infractoras rindieron con ese motivo, así como de todas y cada una de las evidencias que se recabaron durante la integración de la presente investigación, concluye que, en el presente caso, se acreditan omisiones cometidas por los citados servidores públicos, en agravio del quejoso y de sus familiares, que se traducen en violaciones a los derechos humanos del derecho a la legalidad y seguridad jurídica, en relación al derecho de acceso a la justicia, mismas que resultan imputables a la **LIC. PERLA ANGÉLICA VARGAS RAMÍREZ,** Juez Comunitaria adscrita a la Dirección de Seguridad Pública del municipio de Zacatecas, así como al **LIC. PASCUAL VÁZQUEZ PÉREZ,** Agente del Ministerio Público número Dos, adscrito a la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, Tortura y otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes, otrora Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en la Recepción de Detenidos, involucrados en los hechos y al **C. GERARDO GUADALUPE CAMPOS ALANIZ,** Comandante de Guardia de la Dirección de la Policía de Investigación en turno. Más no así de los Elementos de Seguridad

[11] Garantía a la Tutela Jurisdiccional Prevista en el Artículo 17 de la Constitución Federal, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Primera Sala. Mayo de 2004, t XIX, pág. 513.

Pública Municipal de Zacatecas, por considerar que actuaron legalmente. La anterior conclusión, resulta en base a las siguientes consideraciones:

Actuación de los elementos de la Dirección de Seguridad Pública municipal de Zacatecas.

23. Veamos, para iniciar con el análisis de la queja que ahora se resuelve, debemos precisar en este apartado que, de la narrativa de los hechos motivo de queja se advierte, la inconformidad expresada por el señor **Q1**, consistente en la omisión en la que incurrieron los elementos de la Dirección de Seguridad Pública y la Juez Comunitaria, adscritos a la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Zacatecas, que se encontraban de turno el día de los hechos, al no haber puesto a disposición del Ministerio Público, como era su obligación, a **D1**, persona que había agredido a su familia y a quien de manera oportuna lograron detener los mismos elementos de Seguridad Pública Municipal en la flagrante comisión de esa conducta, no obstante, no se dejó a disposición del Ministerio Público, habiendo sido dejada en libertad.

24. Al respecto el **MBA ULISES MEJÍA HARO,** entonces Presidente Municipal de Zacatecas, señaló en su informe, derivado de la información proveniente de las constancias remitidas al **LIC. ANTONIO CASTRO VALDEZ,** Jefe de Unidad de Derechos Humanos del Municipio de Zacatecas, por el **PPAF. JORGE EDUARDO MUÑOZ FRANCO,** entonces Director de Seguridad Pública Municipal de Zacatecas, que, en efectivo, los oficiales **SALVADOR GODINA GARCÍA** y **JOSÉ GUADALUPE HERNÁNDEZ,** atendieron el reporte del sistema de emergencia 911, en el que se señalaba que había una mujer golpeando a otra de edad avanzada, por lo que al acudir al domicilio y al autorizarles el ingreso al mismo, procedieron a empujar la puerta de una habitación para sacar a la persona agresiva, logrando la detención de **D1,** a quien trasladaron a la Dirección de Seguridad Pública de Zacatecas, poniéndola a disposición de la Juez Comunitaria, por los hechos que pudieran ser constitutivos de violencia familiar.

25. Expuso también que, en el parte de la ficha informativa del 23 de julio de 2020, la Juez Comunitaria **LIC. PERLA ANGÉLICA VARGAS RAMÍREZ,** adscrita a la Dirección de Seguridad Pública Municipal, señaló que a las 06:25 horas, la detenida **D1,** fue puesta a disposición del ministerio público, misma que regresaron debido a la negativa del ministerio público en turno de recibir a la detenida, motivo por el cual la juez comunitaria juzgó a **D1** por las faltas administrativas de injuriar u ofender personas y escandalizar o producir ruidos.

26. En respaldo a lo anterior, anexó copia del acta de internación de **D1**, con folio número […] del 30 de julio de 2019 a las 23.50 horas, suscrito por el oficial **JOSÉ GUADALUPE HERNÁNDEZ**, presentada ante la Juez Comunitaria **LIC. PERLA ANGÉLICA VARGAS RAMÍREZ**. Así como la Boleta de Remisión con folio número 33940, de **D1**, al Juez Comunitario, a las 23:50 horas, del 30 de julio de 2019.

27. Se obtuvieron además, evidencias integradas en la carpeta única de investigación marcada con el número […], que se promueve en contra de **Q1**, por el delito de Violencia Familiar que se dijo cometido en perjuicio de **D1**, entre las que destacan las que se transcriben en los numerales 8.1.1., 8.1.2., 8.1.3., 8.1.4., 8.1.5., 8.1.6., 8.1.7. y 8.1.8., de esta resolución, como son:

28. El informe policial homologado realizado por los elementos de la Policía Preventiva de Zacatecas, respecto de la detención de **D1**, en fecha 30 de julio de 2019.

29. La denuncia y/o querella, presentada por Q1**,** a las 01.45 horas del día 31 de julio de 2019, ante el **LIC. PASCUAL VÁZQUEZ PÉREZ,** Fiscal del Ministerio Público de la Unidad Especializada en la Investigación de Detenidos, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, en contra de **D1**, por el delito de Violencia Familiar, de

cuya narrativa de los hechos, se desprende que la denunciada fue detenida por elementos de la Policía Preventiva de Zacatecas.

30. Denuncia y/o querella que presenta **D1**, ante la **LIC. MARÍA ALICIA FLORES CAPETILLO,** Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Violencia de Género del Centro de Justicia para la Mujeres del Estado de Zacatecas, a las 12:11 de fecha 31 de julio de 2019.

31. La denuncia y/o querella que hizo **O1,** hija de **D1,** a las 15:21 horas del 31 de julio de 2019, en contra de la citada detenida por las lesiones y daño en las cosas de que fueron objeto.

32. Las comparecencias de **M1** y de **O2,** a las 09:57 horas del 1º, de agosto de 2019 y del 03 de agosto de 2019, respectivamente, madre e hijo, de **D1**.

33. Así como la declaración del **C. JOSÉ GUADALUPE HERNÁNDEZ,** elemento de la Dirección de Seguridad Pública de Zacatecas, de fecha 17 de octubre de 2019, quien luego de narrar su participación en la detención de D1, por agredir a sus familiares en el interior del domicilio de **O2,** siendo auxiliado entre otros agentes por una oficial femenina, para luego trasladarla él y oficial **SALVADOR GODINA**, a las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Zacatecas, señaló que arribó también a la Dirección, el esposo de **D1** quien les dijo que iba al ministerio Público a poner la denuncia, procediendo ellos luego del llenado de las actas, aproximadamente entre doce y una de la mañana del 31 de julio de 2019, a trasladarla a la Fiscalía General de Justicia, lugar en que el oficial de guardia les pidió que esperaran y que aproximadamente después de 5 horas de espera, les manifestó que no sería recibida por el Fiscal de guardia, regresando con la detenida a la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Zacatecas.

34. Lo manifestado por la **C. VANESA GUADALUPE ARAUJO REYES,** elementos de la Dirección de Seguridad Pública de Zacatecas, del 21 de octubre de 2019, quien refiere que acudió en apoyo por solicitud del oficial SALVADOR GODINA, para la detención de **D1.**

35. De la comparecencia recabada por personal de este Organismo, a la **C. LIC. PERLA ANGÉLICA VARGAS RAMÍREZ,** Juez Comunitaria, adscrita a la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Zacatecas, se desprendió que a las 11:50 horas, (de la noche) del día 30 de julio de 2019, llegaron los oficiales con la detenida **D1**, por violencia familiar, se procede a registrarla e ingresarla a las celdas, y aproximadamente una hora después, los oficiales comienzan a realizar la puesta a disposición para presentarla ante el ministerio público, que luego de que la trasladan al ministerio público, regresaron y dijeron que no se las habían querido recibir, sin señalar los motivos, razón por la cual, la detenida ya no ingresó a las celdas preventivas, permaneciendo en el área de barandilla en lo que egresó sin pagar sanción alguna. Agregó, que no le entregaron constancia que justificara que el ministerio público no les quiso recibir a la detenida.

36. Asimismo, señaló que, estando la detenida en las celdas, se presentó el **Q1,** para informar, que ya había presentado la denuncia e incluso le mostró una copia, que además preguntó si la presentarían ante el ministerio público, por lo que se le dijo que sí, y enterado de ello se retiró.

37. De las copias de las hojas de registro del libro de ingreso y egreso de personas detenidas de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, como puede apreciarse del numeral 4.7, se desprende que **D1**, ingresa a las 23:50 horas del 30 de julio de 2019 y en el apartado de salida se asientan las 06:25 horas del 31 de julio de 2019, asentándose “cumplió arresto” “salida M.P.”

38. Del informe rendido por el **LIC. PASCUAL VÁZQUEZ PÉREZ,** Agente del Ministerio Publico número dos adscrito a la Fiscalía Especializada de Derechos Humanos Tortura

y otros Tratos Crueles Inhumanos o Degradantes, se desprende que efectivamente el 31 de julio de 2019 recibió denuncia por parte del señor **Q1** interpuesta en contra de **D1** por el delito de violencia familiar, lesiones y amenazas, por lo que de inmediato se ordena la recepción y a solicitar la investigación, a peticionar el dictamen psicológico de cada una de las víctimas. Señaló además que fueron las únicas diligencias que se realizaron pues son diligencias primarias de investigación para al día siguiente turnarlo a la Unidad correspondiente afirmando que al quejoso se le dio la atención adecuada, que además el comandante de guardia **GERARDO GUADALUPE CAMPOS ALANIZ** pudo darse cuenta de que no se recibió a **D1**, y que es falso que no quisiera recibirla en calidad de detenida pues nunca tuvo conocimiento de que ocurriera dicha detención, y durante su jornada laboral no se le realizo notificación alguna o bien no acudieron a la unidad los elementos de la dirección de seguridad pública con la detenida.

39. Ahora bien, para entrar al análisis de los hechos que son motivo de queja, conviene precisar, que el párrafo cuarto del artículo 16 de la Constitución General de la República dispone: “Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento que esté cometiendo el delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más cercana y ésta con la misma prontitud a la del Ministerio Público. Existirá un registro inmediato de la detención".

40. En el caso particular de las evidencias reseñadas se desprende, que el 30 de julio de 2019, los elementos de la Policía Preventiva Municipal de Zacatecas, **CC. SALVADOR GODINA GARCÍA** y **JOSÉ GUADALUPE HERNÁNDEZ,** acudieron a atender un reporte del sistema de emergencia 911, habiendo detenido en el lugar de los hechos, por la comisión en flagrancia del presunto delito de violencia familiar, a **D1**, con apoyo de la policía femenina **VANESA GUADALUPE ARAUJO REYES,** como así lo reconoce ésta en su declaración ante el Ministerio Público, realizando los oficiales su traslado a la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Zacatecas, donde fue puesta a disposición de la Juez Comunitaria en turno, adscrita a la Dirección de la citada corporación, **LIC. PERLA ANGÉLICA VARGAS RAMÍREZ**.

41. Detención la anterior, que fue presenciada por el quejoso **Q1,** quien si bien no vivía con su esposa **D1**, por encontrarse separado desde hacía más de un año, acudió a ese domicilio por el llamado que le realizó **M2**, hijo de la detenida, diciéndole que fuera porque su mamá estaba golpeando a **M1** hijo del denunciante y de la agresora, así como a otra hermana, por lo que luego de que el quejoso realizó la llamada al sistema de emergencia 911, acudió al citado domicilio, encontrando destrozos y a su esposa golpeando la puerta de la habitación donde se encontraban la madre y los hijos de la agresora, mencionándole **O1**, hija de esta agresora, la agresión que previamente sufrieron **M1** y ella, y que pretendía abrir la puerta de la habitación, para continuar la agresión con las personas en el interior, llegando enseguida los elementos de la Policía Preventiva de Zacatecas, quienes procedieron a la detención de la agresora.

42. De la misma manera, se encuentra demostrado que una vez detenida **D1**, fue trasladada a las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, y como se demuestra con el acta de internación y la boleta de remisión número […] y […], fue presentada sin demora ante la **LIC. PERLA ANGÉLICA VARGAS RAMÍREZ**, Juez Comunitaria en turno, adscrita a la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Zacatecas, tal y como así lo acepta y reconoce dicha Juez Comunitaria en su comparecencia ante este Organismo. Por lo que bajo estas circunstancias, no se cuestiona la actividad realizada por los agentes de Policía Preventiva que acudieron a la atención del reporte del 911 realizado por el quejoso, consistente en detener a **D1**, en el domicilio de su señora madre **O2**, por las agresiones que ésta y sus nietos sufrieron, por la violencia familiar y ponerla a disposición de la autoridad inmediata, como lo es, de la Juez Comunitaria **LIC. PERLA ANGÉLICA VARGAS RAMÍREZ**.

43. Ajustándose así, la actividad policial, a lo establecido no sólo por la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Zacatecas, que en su artículo 51, contempla las obligaciones de las instituciones policiales, entre ellas, en su fracción III, prestar auxilio a las personas amenazadas por algún peligro o que hayan sido víctimas u ofendidos de

algún delito, así como brindar protección a sus bienes y derechos de forma oportuna, congruente y proporcional al hecho, acto que además se respalda con su respectivo informe homologado, en el que se hace una pequeña descripción del hecho y que además está ordenado por la misma ley en su artículo 52. Sino además, también, a lo dispuesto por el párrafo quinto del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

44. Ya que, además, como puede acreditarse, con lo declarado por el oficial **JOSÉ GUADALUPE HERNÁNDEZ,** elemento captor, en su declaración vertida ante el ministerio público, posterior a ser puesta a disposición de la Juez Comunitaria la detenida **D1**, fue trasladada entre las 12:00 horas del 30 de julio de 2019 y 01:00 horas del 31 de julio de 2019, a las instalaciones de la Dirección General de la Policía de Investigación de la entonces Procuraduría General de Justicia ahora Fiscalía General de Justicia del Estado, para dejarla a disposición del Ministerio Público en turno, por el presunto delito de violencia familiar cometido en contra de sus familiares, sin embargo, después de esperar por un período de tiempo prolongado, no fue recibida la persona detenida, en esa Institución.

45. En adición, la copia del oficio número […], documento suscrito por los **CC. JOSÉ GUADALUPE HERNÁNDEZ** y **SALVADOR GODINA GARCÍA**, elementos de la Policía Preventiva Municipal de Zacatecas, a efecto de poner a disposición del Ministerio Público a la detenida **D1**, exhibida ante este Organismo, por la autoridad, para respaldar la información de la actuación de los elementos policiales aludidos, mismos que atendieron el reporte e intervinieron en la detención.

46. Señalamiento que se ve respaldado con lo declarado por la **LIC. PERLA ANGÉLICA VARGAS RAMÍREZ**, Juez Comunitaria en turno, de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Zacatecas, de la que se advierte que una vez que los elementos de esa corporación le dejaron a la Juez Comunitaria a su disposición a la detenida **D1**, previos trámites para su remisión, trasladaron a la detenida para ponerla a disposición del Ministerio Público, regresando con la detenida posteriormente, a las 06:30 horas, diciendo que no se las habían querido recibir.

47. Pero sobre todo, sustentado con lo depuesto por la propia detenida **D1**, quien en su denuncia ante la Fiscalía General de Justicia, por los citados hechos, hace alusión de que posterior a que la trasladaron a los separos de la Policía Preventiva de Zacatecas, donde estuvo esposada y sentada en una banca de cemento, la sacaron de los separos en la madrugada para llevarla a la Dirección de la Policía Ministerial, porque había una denuncia en su contra, aseverando que no la quisieron recibir, porque el ministerial que estaba de guardia señaló que estaba sin dormir y muy cansado, y que regresaran hasta que hubiera cambio de guardia, siendo trasladada de nueva cuenta a la Dirección de la Policía Preventiva de Zacatecas, de donde salió aproximadamente a las diez de la mañana.

48. En ese sentido, queda plenamente comprobada que la actuación de los **CC. SALVADOR GODINA GARCÍA** y **JOSÉ GUADALUPE HERNÁNDEZ,** elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Zacatecas, actuaron correctamente, conforme el imperativo Constitucional contemplado en el párrafo quinto del artículo 16, en razón de que, al haber detenido a **D1**, en flagrante comisión de un presunto delito de violencia familiar, inmediatamente después y sin demora alguna, procedieron a ponerla a disposición de la autoridad inmediata como lo era la Juez Comunitaria adscrita a la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Zacatecas, aproximadamente a las 23.50 horas del 30 de julio de 2019, como así lo reconoce la propia Juez Comunitaria, **LIC. PERLA ANGÉLICA VARGAS RAMÍREZ**, para luego, después de realizar los trámites correspondientes, aproximadamente entre las 24:00 horas del 30 de julio de 2019 y 01:00 horas del 31 de julio de 2019, proceder con prontitud, a trasladar a **D1,** para ponerla a disposición formalmente del Ministerio Público y dejarla con el oficio correspondiente. Circunstancia la anterior, que por causas ajenas a la voluntad de esos agentes policiales, no fue posible, en razón de que, el personal de guardia de la Dirección General de la Policía de Investigación en turno, en la fecha de los hechos, se

negó a recibirla. Cumpliendo con lo anterior, los agentes preventivos, con las exigencias del citado imperativo normativo. Por tal razón, se estima en el presente caso, que la conducta de estos servidores públicos se encuentra ajustada a derecho, sin que se vulneraran los derechos humanos del quejoso.

49. No pasa inadvertido para este Organismo, que los elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, **CC. SALVADOR GODINA GARCÍA** y **JOSÉ GUADALUPE HERNÁNDEZ,** fueron citados en diversas ocasiones, por conducto del **P.A.F.F. JORGE EDUARDO MUÑOZ FRANCO**, entonces Director de Seguridad Pública Municipal de Zacatecas, a través del oficio número […], de fecha 02 de septiembre de 2020, para que comparecieran a las 12:00 y 13:00 horas, respectivamente, del 17 de septiembre de 2020 y mediante el oficio número […] de fecha 07 de octubre de 2020, para que comparecieran a las 13:00 y 14:00 horas, respectivamente, del 16 del citado mes y año, para que otorgaran su versión de los hechos, en uso de su derecho de audiencia, sin haber comparecido, ni ser informado por la autoridad inmediata las causas de su incomparecencia, a pesar de que los sendos citatorios, fueron recibidos el 04 de septiembre de 2020 y 08 de octubre de 2020, por esa Dirección, según se advierte de los acuses de recibo.

De las actuaciones de la LIC. PERLA ANGÉLICA VARGAS RAMÍREZ, Juez Comunitaria, adscrita a la Dirección de Seguridad Pública del municipio de Zacatecas.

50. En ese sentido se advierten también las acciones y omisiones en las que incurrió la **LIC. PERLA ANGÉLICA VARGAS RAMÍREZ,** Juez Comunitaria adscrita a la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Zacatecas, al no haber apegado su actuar a la legalidad, lo cual trajo como consecuencia la violación a los derechos humanos, no únicamente del quejoso y sus familiares que fueron objeto de violencia, sino también de la propia **D1,** quien fuera detenida por la presunta comisión de hechos que pudieren ser constitutivos del delito de violencia familiar.

51. En efecto, de las hojas de internación y de remisión, así como de la tarjeta informativa suscrita por la Juez Comunitaria, que en copia simple obran en el expediente que integran la investigación sobre este particular, se desprende, que **D1,** fue puesta a disposición de la **LIC. PERLA ANGÉLICA VARGAS RAMÍREZ,** Juez Comunitaria en turno, adscrita a la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Zacatecas, por parte de los **CC. SALVADOR GODINA GARCÍA** y **JOSÉ GUADALUPE HERNÁNDEZ,** elementos de la Policía Preventiva de Zacatecas, a las 23:50 horas del día 30 de julio de 2019, por considerar que fue, presuntamente sorprendida en la flagrante comisión de hechos que pudieran constituir un delito, como ya se ha mencionado con anterioridad.

52. Aún y cuando lo anterior, lo trate de evadir o no lo reconozca la citada Juez Comunitaria C. **LIC. PERLA ANGÉLICA VARGAS RAMÍREZ**, en su declaración vertida ante personal de este Organismo Estatal, en la que refirió que, a las 11:50 horas, llegaron los oficiales con una detenida de nombre **D1**, por violencia familiar, por lo que se procede a registrarla e ingresarla a celdas, y posteriormente también se desprende que a las 06:30 horas del día 31 de julio de 2019, fue trasladada por elementos de la Policía Preventiva, a las instalaciones de la Dirección de Policía de Investigación para ponerla a disposición del Ministerio Público, la cual fue regresada en virtud a que no fue recibida, sin entregarle constancia alguna que justificara tal hecho.

53. De lo anterior se aprecia, que la **C. LIC. PERLA ANGÉLICA VARGAS RAMÍREZ,** Juez Comunitaria en turno, adscrita a la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Zacatecas, a quien por parte de los elementos policiales **CC. SALVADOR GODINA GARCÍA** y **JOSÉ GUADALUPE HERNÁNDEZ,** se le puso a su disposición a la detenida **D1**, por presunta agresión familiar, a las 23:50 horas, del día 30 de julio de 2019, tenía la obligación, con ese carácter de Juez Comunitaria, de ponerla a disposición inmediata del Ministerio Público, puesto que era evidente que no se estaba

ante la presencia de la comisión de una falta administrativa, la que de acuerdo a sus facultades pudiera sancionar, sino ante la presunta comisión de un delito, por ende, su deber, era poner inmediatamente a la detenida **D1**, a disposición del Ministerio Público, de conformidad con la obligación que le impone el párrafo quinto del artículo 16 Constitucional anteriormente aludido, así como lo señalado por el diverso numeral 42 de la Ley de Justicia Comunitaria, que dispone: "El Juez Comunitario hará la remisión al Ministerio Público de los hechos de que tenga conocimiento, con motivo de sus funciones y que puedan constituir delito, poniendo a su disposición a la detenida, en forma inmediata".

54. Por tanto, el hecho de que se pusiera a disposición del Juzgado Comunitario, a la detenida **D1**, a las 23:50 horas del 30 de julio de 2019 y la Juez Comunitaria no la pusiera de manera inmediata ante el Ministerio Público, incurrió en irregularidades al contravenir lo dispuesto por el artículo 16 Constitucional y 42 de la Ley de Justicia Comunitaria del Estado de Zacatecas, por no hacerse cargo directamente de poner a disposición del Ministerio Público a la detenida. Asimismo, otra irregularidad lo fue, el hecho de que la referida Juez Comunitaria consintiera o permitiera que lo elementos policiales trasladaran a la detenida, por cuenta propia para intentar ponerla ante dicha autoridad ministerial a su disposición.

55. Pero más aún, dicha Juez Comunitaria, en su caso, también dejó de observar el plazo que tenía para resolver sobre la situación legal de la detenida, en términos de lo dispuesto por el artículo 32 de la Constitución Política del Estado de Zacatecas, es decir, poner a la detenida inmediatamente a disposición del Ministerio Público por considerar que el ilícito en que incurrió, se trataba de la comisión de un presunto delito, o bien, en su caso, imponer la sanción alternativa de multa o en su defecto, permutarla por el arresto que correspondiera, si se tratase de una infracción comunitaria.

56. No obstante lo anterior, sin realizar ninguna acción para cerciorarse si los oficiales preventivos habían o no puesto a disposición del Ministerio Público a la detenida, dado el transcurso del tiempo, sin que regresaran los oficiales, esperó pacientemente hasta que éstos retornaron nuevamente a la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Zacatecas, con la detenida, y le hicieron del conocimiento a la Juez Comunitaria, que la citada autoridad se había negado a recibirla; pero no realizó ninguna otra acción como llamar a dicha autoridad para conocer la razón, pedir apoyo a las autoridades superiores de ambas instituciones, o bien, ella directamente ponerla a disposición de nueva cuenta, para que se diera cumplimiento al imperativo normativo, no obstante, sin internarla en los separos preventivos, procedió a mantenerla sentada en una banca en el área de barandilla, para posteriormente después de 6 horas como se encuentra registrado en las hojas del libro de ingresos y egresos de la referida Dirección o de 10 horas como lo manifiesta la detenida, se procedió a dejarla en libertad sin cobrarle multa alguna.

57. Así las cosas, es claro que la **LIC. PERLA ANGÉLICA VARGAS RAMÍREZ**, Juez Comunitaria, adscrita a la Dirección de Seguridad Pública Municipal, no apreció correctamente los hechos que fueron sometidos a su consideración, puesto que la autoridad competente para conocer de la existencia de un delito, en términos de lo dispuesto por el artículo 21 Constitucional es el Ministerio Público, quien tiene la exclusiva facultad de la persecución de los mismos. Por tanto, la Juez Calificadora como Profesional del Derecho y estando a su disposición la detenida, debió de manera inmediata, con apoyo del personal operativo de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, canalizar al afectado y a la detenida ante el Ministerio Público, para que fuere éste, el que legalmente determinara sobre la situación legal de la detenida, y no esperar hasta que fueran los propios elementos captores quienes la pusieran a disposición de la mencionada autoridad, como ocurrió, ya que refiere, la trasladaron a las 06:11 horas, sin resultado favorable, por lo que procedió posteriormente a darle salida, es decir a dejarla en libertad, sin imponerle sanción alguna.

58. En consecuencia, se reitera que la autoridad administrativa que recibió a la detenida, estaba compelida a ponerla sin demora a disposición del Representante

Social, máxime que el quejoso le hizo del conocimiento a la Juez Comunitaria que ya había presentado su denuncia, condición que no fue acatada en detrimento de los derechos de la agraviada, del quejoso y de sus familiares, a quienes les asistía el derecho para que se les administrara justicia por los tribunales que estaban expeditos para impartirla en los términos y plazos que establecen las leyes de conformidad con el artículo 17 constitucional.

59. Dicha omisión también se tradujo en agravio de la detenida al incurrirse en una retención ilegal, tomando en consideración que su puesta a disposición ante la Juez Comunitaria por parte de los agentes de la Policía Preventiva Municipal de Zacatecas, ocurrió a las 23:50 horas, del día 30 de julio de 2019. No obstante lo anterior, la **LIC. PERLA ANGÉLICA VARGAS RAMÍREZ**, no determinó su remisión ante el Ministerio Público como procedía, pues ella misma refiere que, se procedió a registrarla e ingresarla a la celda, y aproximadamente una hora después, los oficiales regresan y comienzan a realizar la puesta a disposición para presentarla ante el ministerio público, y a las 6:30 horas según su decir, la trasladan al ministerio público, que regresaron y le dijeron que no se las habían querido recibir sin señalar motivos, razón por la cual, la detenida ya no ingresó a las celdas de los separos preventivos, sino que ella permaneció en el área de barandilla, en lo que se le daba salida sin pagar sanción alguna, observando del libro de registro que salió en libertad a las 06:25 del día 31 de julio de 2019, permaneciendo detenida por un espacio de (6:35) seis horas con treinta y cinco minutos, aproximadamente, lo cual se tradujo en una retención ilegal, situación producto de no haber respetado los términos que la Constitución Federal, la Constitución Política del Estado de Zacatecas y la Ley de Justicia Comunitaria del Estado de Zacatecas, establecen. Máxime que, el quejoso **Q1**, se presentó ante la Juez Comunitaria y le informó que ya había presentado su denuncia.

60. Por lo anterior, se puede advertir entonces, que la **LIC. PERLA ANGÉLICA VARGAS RAMÍREZ**, Juez Comunitaria, adscrita a la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Zacatecas, con sus acciones y omisiones, trasgredió lo dispuesto en el quinto párrafo, del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 42 de la Ley de Justicia Comunitaria del Estado de Zacatecas, ya que, en su caso, como autoridad inmediata, al tener a su disposición a la persona detenida por la presunta comisión de un delito, como en el presente caso, estaba obligada, con ese carácter, a ponerla con la misma prontitud a disposición del Ministerio Público, imperativo normativo que debió acatarse, sin mayor trámite que el realizado para ese fin, por la autoridad inmediata. Puesto que, para que los elementos policiales o la autoridad inmediata, pongan a una persona detenida a disposición del Ministerio Público, no importa el horario, si existe o no denuncia o querella, o la previa anuencia del Ministerio Público en turno, pues esta autoridad, tiene la obligación de recibir a las personas que hayan sido detenidas y se dejen a su disposición, siendo clara y precisa la normatividad, en este sentido, pues el único requisito es que los hechos en cuestión constituyan delito y se haya detenido a las personas por cualquiera de las formas establecidas en la ley.

61. Circunstancias las anteriores, que evidencian el indebido actuar de la Juez Calificadora referida, por razón de que como ella misma reconoce, tuvo conocimiento que la detención de **D1,** había ocurrido en flagrancia, de ahí su obligación de haberla remitido al Ministerio Público precisamente para no violentar los derechos humanos tanto del ofendido como de la presunta responsable.

62. Así las cosas, como ya se expuso, la omisión en la puesta a disposición del Ministerio, de D1, por parte de la Juez Comunitaria, la demora injustificada para resolver en tiempo y forma la situación legal de D1, y la falta de acciones de la Juez Comunitaria para verificar que cumplimentara con el dispositivo legal por parte del Ministerio Público, constituye una violación de legalidad y seguridad jurídica en relación al derecho de acceso a la justicia en perjuicio del quejoso y sus familiares, que debe ser reprochables a dicha servidora pública, a título de responsabilidad administrativa.

Actuación del LIC. PASCUAL VÁZQUEZ PÉREZ, otrora Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en la Recepción de Detenidos y del personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado.

63. Asimismo, precisó **Q1**, que la queja la presentó en contra del Agente del Ministerio Público por los hechos ocurridos el 30 de julio de 2019, quien responde al nombre de **PASCUAL VÁZQUEZ PÉREZ,** ya que este servidor público fue quien recibió su denuncia, pero no recibió como detenida a su ex esposa **D1**, aun y cuando los elementos de Seguridad Pública del municipio de Zacatecas, la detuvieron en flagrante **DELITO DE VIOLENCIA FAMILIAR**, pues considera que los elementos de Policía Preventiva de Zacatecas no se tomaron la molestia de presentar a la detenida ante el Ministerio Público y sólo expresaron que le darían un arresto de 36 horas, pero ello no sucedió, pues salió en libertad entre siete y ocho de la mañana, dejando en estado de indefensión a **M1** y a **O1**, pues tenían el deber de hacer saber al Ministerio Público que tenían detenida a su ex esposa y no lo hicieron.

64. Ahondó el quejoso en su escrito de denuncia ante este Organismo Estatal, que la queja es en contra del servidor público que **RESULTE RESPONSABLE DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE ZACATECAS**, ya que estimó que se cometieron una serie de violaciones a derechos humanos en su perjuicio y de su menor hijo **M1**.

65. De la denuncia interpuesta por el quejoso **Q1**, a las 01:45 horas, del 30 de julio de 2019, ante el **LIC. PASCUAL VÁZQUEZ PÉREZ**, entonces Agente del Ministerio Público, adscrito a la Unidad Especializada en la Recepción de Detenidos, de la Fiscalía General de Justicia del Estado, se puede apreciar que, el quejoso claramente, le hizo saber al Ministerio Público, y así quedó asentado en su escrito de denuncia, que los elementos de la Policía Municipal de Zacatecas, habían detenido a la agresora y que ésta se encontraba en los separos de esa corporación.

66. Al respecto el **LIC. PASCUAL VÁZQUEZ PÉREZ**, otrora Fiscal del Ministerio Público de la Unidad Especializada en la Recepción de Detenidos, afirmó, que él personalmente atendió y recibió la denuncia que formalizó el agraviado **Q1**, señalando que nunca tuvo conocimiento de que ocurriera la detención de **D1**, que su horario laboral y la de sus colaboradores es de 24 horas, el cual inicio a las 8:00 horas del día 30 de julio de 2019 y concluyó a las 08:00 horas del día 31 de julio de 2019 y dentro de ese horario no se le notificó o no acudieron hasta esa unidad los elementos de la Policía Municipal de Zacatecas, con la detenida, ya que el quejoso recibió una adecuada atención y por encontrarse involucrado un menor de edad se solicitó la intervención extrajudicial de un Ministerio Público, incluso atendiendo la situación que se presentaba intervino el comandante de guardia **GERARDO GUADALUPE CAMPOS ALANIZ**, quien se pudo dar cuenta de que no se recibió detenida a **D1**.

67. En su informe complementario, expuso el **LIC. PASCUAL VÁZQUEZ PÉREZ**, entonces Fiscal del Ministerio Público de la Unidad Especializada en la Recepción de Detenidos, que el de manera personal atendió y recibió la denuncia que formalizó el quejoso, que no se enteró de que le llevaran detenida a **D1,** y que, no es posible otorgar ninguna razón del porqué no solicitó al Juzgado Comunitario le pusieran a disposición a la detenida, en razón que conforme al numeral 42 de la Ley de Justicia Comunitaria, es una obligación del Juez Comunitario hacerlo, y no había necesidad de decirle al juez lo que debía hacer, además de que reitera, él jamás tuvo conocimiento de que la policía llegara a la Unidad a mi cargo con la detenida.

68. Fueron citados por este Organismo, por conducto de sus superiores inmediatos, el Policía de Investigación **GERARDO GUADALUPE CAMPOS ALANIZ**, al igual que los oficiales de la Policía Preventiva, **CC. JOSÉ GUADALUPE HERNÁNDEZ** y **SALVADOR GODINA GARCÍA,** sin que ninguno hubiere comparecido.

69. No obstante lo anterior, el **C. JOSÉ GUADALUPE HERNÁNDEZ,** elemento de la Policía Preventiva de Zacatecas, compareció ante el Ministerio Público, en la que

señaló, que aproximadamente entre las 12 de la noche del 30 de julio de 2019 y 01 horas de la mañana del 31 de julio de 2019, arribaron a las instalaciones de la Policía de Investigación trasladando a la detenida **D1,** para dejarla a disposición del Ministerio Público, por violencia familiar, comunicándoles el oficial de guardia que esperaran, esperando aproximadamente 5 horas hasta que les dijo que no sería recibida por el Fiscal de guardia, regresando por ello a la Dirección General de Seguridad Pública Municipal de Zacatecas.

70. Lo cual, respalda la **LIC. PERLA ANGÉLICA VARGAS RAMÍREZ**, Jueza Comunitaria adscrita a la Dirección de Seguridad Pública Municipal, quien en su informe refiere que los elementos de la Policía Municipal de Zacatecas, después de realizar los trámites, trasladaron a la detenida para ponerla a disposición del Ministerio Público, regresando posteriormente diciéndole que no la habían recibido, sin darle ningún documento que mostrara tal situación.

71. De la misma manera **D1**, persona detenida, argumenta que los elementos de la Policía Municipal de Zacatecas, posterior a su detención, en la madrugada la sacaron de los separos preventivos y la llevaron a las instalaciones de la Policía Ministerial ahora Dirección de la Policía de Investigación, pero no la quisieron recibir, porque el Policía Ministerial de guardia le dijo que ya estaba muy cansado y sin dormir, y que la recibirían hasta que hubiere cambio de guardia, trasladándola nuevamente a los separos de la Policía Preventiva Municipal de Zacatecas.

72. Con los anteriores medios de pruebas, se puede demostrar que los elementos de la Policía Municipal de Zacatecas, que procedieron a la detención de **D1,** inmediatamente después de la realización de los trámites para tal efecto, sin demora alguna, la trasladaron a las instalaciones de la Dirección de la Policía de Investigación para dejarla a disposición del Ministerio Público, por el delito de violencia familiar en perjuicio de sus familiares, misma que no fue recibida por el personal de guardia, de la Dirección General de la Policía de Investigación, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas.

73. Bien, al respecto, no pasa inadvertido por este Organismo Estatal, que si bien es cierto, de las constancias que integran la carpeta única de investigación número 6507/2019, y específicamente, del escrito de la denuncia presentada por el **Q1**, se desprendió que se le hizo saber al Fiscal del Ministerio Público, en su narrativa de hechos, en 2 ocasiones, que los elementos de la Policía Preventiva habían detenido a **D1,** parte agresora, y que ésta se encontraba privada de su libertad en separos preventivos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Zacatecas, por la presunta comisión flagrante de ese delito de Violencia Familiar.

74. Por tanto, no es creíble, la afirmación que realiza el Fiscal del Ministerio Público de la Unidad Especializada en la Recepción de Detenidos, **LIC. PASCUAL VÁZQUEZ PÉREZ,** de que nunca tuvo conocimiento de la detención de **D1,** si tomamos en consideración que es el propio Agente del Ministerio quien levantó la denuncia al quejoso, donde éste le hizo saber que **D1**, había sido detenida por los elementos policiales y se encontraba en la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Zacatecas, por esos hechos, lo cual se dejó asentado en la citada diligencia.

75. Situación la anterior, que en términos de lo dispuesto por el artículo 1º, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, obliga a toda autoridad a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, en el ámbito de su competencia, y en ese sentido, en primer lugar, compelía al Ministerio Público, una vez que transcurría el tiempo, sin que se le pusiere a su disposición la detenida D1, por parte de la autoridad municipal, impedir la demora en la puesta a disposición. No obstante, no lo hizo, arguyendo no haberse dado cuenta.

76. Ya que, si bien, por otra parte, pudo ser cierto, que a dicho Agente de Ministerio Público, no se le haya notificado por el personal de guardia de la policía de investigación, de que acudieron hasta esa Unidad Especializada de su adscripción, los

elementos de la Policía Municipal de Zacatecas, llevando a la detenida para ponerla a su disposición, ello de ninguna manera los exonera de la responsabilidad administrativa, que les pudiere corresponder tanto al Agente de Ministerio Público, como al personal de guardia, de la Fiscalía General de Justicia del Estado, por su negativa de recibir a la persona detenida, para dejarla a disposición del Ministerio Público.

77. Puesto que como ha quedado evidenciado en autos, no solo se cuenta con la afirmación del **C JOSÉ GUADALUPE HERNÁNDEZ,** elemento de la Policía Preventiva Municipal de Zacatecas. en ese sentido de que no se quiso recibir a la detenida por el personal de guardia de la Dirección General de la Policía de Investigación, de la Fiscalía General de Justicia del Estado, sino que también lo corrobora fehacientemente la propia detenida **D1,** misma que precisa, que fue el oficial de guardia, quien no quiso recibirla porque estaba cansado y no había dormido, diciéndoles que la llevaran cuando se hiciera el cambio de guardia, que según la información proporcionada por el mismo Agente del Ministerio Público **LIC. PASCUAL VÁZQUEZ PÉREZ,** el Comandante de Guardia en esa fecha lo era el **C. GERARDO GUADALUPE CAMPOS ALANIZ**,

78. En adición a lo que sostuvo la **LIC. PERLA ANGÉLICA VARGAS RAMÍREZ**, Juez Comunitaria, adscrita a la Dirección de Seguridad Pública Municipal, quien señaló que luego de que los elementos de la Policía Municipal de Zacatecas, realizaron los trámites respectivos para poner a disposición a la persona detenida, la trasladaron a las instalaciones de la Dirección de Policía de Investigación, y regresaron posteriormente con la persona detenida diciendo que no la habían querido recibir.

79. Acto que resulta violatorio a los derechos humanos de legalidad y seguridad jurídica, en relación a la detenida, del quejoso y sus familiares, por los servidores públicos de la Fiscalía General de Justicia del Estado, de guardia en la Dirección de la Policía de Investigación en la fecha de los hechos, que se negaron a recibir a la detenida **D1**, que llevaban los elementos de la Policía Municipal de Zacatecas, **CC. JOSÉ GUADALUPE HERNÁNDEZ** y **SALVADOR GODINA GARCÍA,** para dejarla a disposición del Agente del Ministerio Público en turno, toda vez que correspondía al citado Agente del Ministerio Público y no a al personal de guardia, de la Dirección General de Investigación, resolver lo conducente sobre la detenida.

80. De la misma manera este Organismo estima, que el **LIC. PASCUAL VÁZQUEZ PÉREZ**, en su carácter de Fiscal del Ministerio Público de la Unidad Especializada en la Recepción de Detenidos, al tener conocimiento desde las 01:45 horas del 31 de julio de 2019, que **D1,** se encontraba detenida en los separos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Zacatecas, por el delito de violencia familiar, como parcialmente lo reconoció este servidor público, en su informe complementario, al señalar que aun cuando es cierto que, el propio denunciante refirió que su hija le dijo que había llegado la policía al lugar de los hechos y detuvo a su mamá; argumentado este Agente de Ministerio Público, que él jamás tuvo conocimiento de que la policía llegara a la Unidad a su cargo con la detenida.

81. Tal circunstancia, lejos de exentarlo de responsabilidad, se estima, que dicho servidor público durante el lapso de su turno al no tener noticia de que se le hubiere puesto a su disposición la detenida, debió cerciorarse si ésta aún se encontraba detenida en los separos de la Policía Municipal de Zacatecas, y en su caso solicitar durante el transcurso de su turno y hasta antes de las 08:00 horas del 31 de julio de 2019, en que concluía el mismo, que se le pusiera a su disposición la citada detenida, por tratarse de la probable responsable de la comisión de un presunto delito, y hacer cesar una detención prolongada o ilegal; por lo que, al no hacerlo, con dicha omisión vulneró también los derechos humanos de legalidad y seguridad jurídica en perjuicio de los agraviados y consecuentemente su derecho al acceso a la justicia, independientemente de que tanto los elementos de la policía municipal como la juez comunitario tuvieren la obligación de hacerlo, sin constituir esto, ningún obstáculo ni impedimento para que el Ministerio Público lo solicitara.

82. Puesto que, con esa omisión, el **LIC. PASCUAL VÁZQUEZ PÉREZ**, en su carácter de Fiscal del Ministerio Público de la Unidad Especializada en la Recepción de Detenidos, dejó de observar lo dispuesto por el artículo 1°, párrafos segundo, tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, que disponen que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Así como, la obligación que tienen las autoridades en el ámbito de su competencia, de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios que en este mismo párrafo se señalan. Por lo que consecuentemente el estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. Ordenando la prohibición de todo tipo de acto que atente contra la dignidad humana, y que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

83. Por lo que al no dar cumplimiento a la obligación de hacer cesar la privación prolongada o ilegal de la libertad de que estaba siendo objeto la detenida, en razón de haber obtenido desde un inicio esta autoridad, la noticia de que **D1,** se encontraba detenida en los separos preventivos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal del municipio de Zacatecas, debió solicitar información al Juez Comunitario o autoridad que la tenía bajo su poder, a efecto de realizar las diligencias que le competían hasta ese momento.

84. Dejando por ende de observar, además lo dispuesto por el numeral 2 del Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley en el desempeño de sus funciones, que establece, que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en el desempeño de sus funciones, tienen la obligación de respetar y proteger la dignidad humana y mantener y defender los derechos humanos de todas las personas. En relación con las obligaciones que a la citada autoridad impone el artículo 131, del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el sentido de que el Ministerio Público en toda investigación de los delitos, debe vigilar que se cumpla estrictamente con los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados.

85. Por lo que tomando en consideración que la detención de cualquier persona sin orden o mandamiento judicial, procede solamente en los casos de flagrancia, según lo dispuesto en el artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En cumplimiento de una orden de aprehensión o de comparecencia, escrita y firmada por un juez según lo dispuesto en los artículos 141 y 142 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En cumplimiento de una orden de detención urgente, escrita y firmada por el Ministerio Público en términos de lo dispuesto en el artículo 150 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En cumplimiento de una medida de apremio o disciplinaria decretada por un órgano jurisdiccional competente o por el Ministerio Público, mediante escrito y aun en forma verbal, según el caso. En este supuesto, se deben acatar estrictamente las instrucciones del Juez, Tribunal o Ministerio Público ordenador.

86. En el presente caso aconteció lo señalado en la primera hipótesis, realizada por los elementos de la Policía Preventiva Municipal de Zacatecas, quienes trasladaron a la detenida para dejarla a disposición del Ministerio Público, sin embargo, no fue recibida. Por lo que, correspondía al Ministerio Público determinar su situación jurídica en relación a la obtención o no de la libertad de la detenida, y además evaluar las circunstancias de los hechos que se habían cometido, considerando los riesgos y/o amenazas a partir de la comisión flagrante del delito del que se le estaba dando noticia, priorizando la seguridad tanto de la persona detenida como de las víctimas del delito.

87. En consecuencia, y tomando en consideración los argumentos lógico jurídicos que se esgrimieron a lo largo de la presente resolución; se concluye que, en el presente caso, se violentaron en perjuicio del agraviado, de sus familiares y de la propia detenida, los derechos humanos de legalidad y seguridad Jurídica, por parte del personal de guardia de la Dirección General de la Policía de Investigación, que se negó

a recibir de los **CC. SALVADOR GODINA y JOSÉ GUADALUPE HERNÁNDEZ,** a la detenida **D1**, que iban a poner a disposición del Ministerio Público correspondiente, así como por parte del **LIC. PASCUAL VÁZQUEZ PÉREZ**, en su carácter de Fiscal del Ministerio Público de la Unidad Especializada en la Recepción de Detenidos, en la fecha de los hechos, por no haber solicitado a la Dirección de la Policía Municipal de Zacatecas o al Juzgado Comunitario adscrito a dicha Dirección, le pusiera a su disposición a la detenida **D1,** a fin de evitar la demora en la puesta a disposición; con lo que, el citado personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado, violentó el derecho de acceso a la justicia. Lo cual, desde luego, también debe ser reprochable a los citados servidores públicos a título de responsabilidad administrativa.

VII. CONCLUSIÓN DEL CASO.

1. Esta Comisión rechaza la conducta omisa ante el incumplimiento de sus atribuciones de las autoridades, en perjuicio de **Q1**y sus familiares, atribuible a Juez Comunitaria adscrita a la Dirección de Seguridad Pública de Zacatecas, Agente del Ministerio Público y personal de Guardia de la Dirección de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado; así como el quebranto del derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica en relación con el derecho al acceso a la justicia de que fueron objeto, al no haber realizado oportunamente los trámites necesarios para que **D1** quien se encontraba detenida por la presunta comisión de un delito, fuese recibida para que el Ministerio Público en turno resolviera lo conducente.

VIII. DETERMINACIÓN DE LAS VÍCTIMAS.

1. La Ley de Atención a Víctimas del Estado de Zacatecas, de acuerdo con la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder, se entiende por “victimas” a todas las personas que, individual o colectivamente hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en los Estados Miembros, incluida la que proscribe el abuso de poder.

2. De la misma manera se considera “victima” a una persona, con arreglo a la presente Declaración, independientemente de que se identifique, aprehenda, enjuicie o condene al perpetrador e independientemente de la relación familiar entre el perpetrador y la víctima. En la expresión “víctima”, se incluye además en su caso, a los familiares o personas a cargo que tengan inmediata relación con la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir su victimización.

3. En ese contexto, al haber sufrido el quejoso **Q1** y sus familiares **M1, M2, O1** y **O2,** un menoscabo a sus derechos humanos de legalidad y seguridad jurídica en relación con el derecho al acceso a la justicia, por las omisiones en que incurrieron los citados servidores públicos, al no realizarse por los Servidores Públicos señalados como responsables, oportunamente los trámites correspondientes para que la persona detenida estuviese a disposición del Ministerio Público y resolviera éste lo conducente, se determina en el presente caso, considerar como víctimas directas a **Q1**y sus familiares **M1, M2, O1** y **O2.**

IX. REPARACIONES.

1. De conformidad con lo establecido en los artículos 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 51 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, al acreditarse violación a los derechos humanos de los **Q1**, **M1, M2, O1** y **O2,** atribuibles respectivamente a la servidora pública municipal y a los servidores públicos del Estado de Zacatecas, la Recomendación

formulada al respecto debe incluir las medidas que procedan para lograr la efectiva restitución de las personas afectadas en sus derechos.

2. Dichas reparaciones, de conformidad con los Principios y Directrices básicas sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, en su resolución aprobada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidad el 16 de diciembre de 2005, establece que "[u]na reparación adecuada, efectiva y rápida tiene por finalidad promover la justicia, remediando las violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos o las violaciones graves del derecho internacional humanitario."[12] Para ello, "[l]a reparación ha de ser proporcional a la gravedad de las violaciones y al daño sufrido"[13]; esto es, "…una reparación plena y efectiva…", "…en las formas siguientes: restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición."[14]

A) La indemnización.

1. La indemnización ha de concederse, de forma apropiada y proporcional a la gravedad de la violación y a las circunstancias de cada caso, por todos los perjuicios económicamente evaluables que sean consecuencia de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos o de violaciones graves del derecho internacional humanitario, tales como los siguientes:

a) El daño físico o mental;
b) La pérdida de oportunidades, en particular las de empleo, educación y prestaciones sociales;
c) Los daños materiales y la pérdida de ingresos, incluido el lucro cesante;
d) Los perjuicios morales;
e) Los gastos de asistencia jurídica o de expertos, medicamentos y servicios médicos y servicios psicológicos y sociales.[15]

2. En el presente punto, la indemnización debe realizarse a favor de las víctimas directas de las violaciones a derechos humanos que se acreditaron en este caso, que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 4 fracción I y II, de la Ley de Atención a Víctimas del Estado de Zacatecas, correspondería a los **Q1**, **M1, M2, O1** y **O2**, para que, en su caso, sean beneficiarios del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.

B) La rehabilitación.

1. La presente reparación debe incluir la atención psicológica,[16] en ese contexto, las medidas de rehabilitación buscan reducir los padecimientos físicos y psicológicos de las víctimas, a través del otorgamiento de servicios de atención médica, psicológica, jurídica y social que éstas requieran.

2. Por lo tanto, deberá brindarse la atención psicológica a los **Q1**, **M1, M2, O1** y **O2,** por la afectación emocional que pudieran haber causado las omisiones por parte de las autoridades, de las que se tiene acreditada su responsabilidad.

C) De las medidas de satisfacción.

---

[12] ONU Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, en su 60/147 Resolución aprobada por la Asamblea General el 16 de diciembre de 2005, http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/RemedyAndReparation.aspx, fecha de consulta 11 de octubre de 2017, párr. 15.
[13] Ídem.
[14] Ibídem, párr. 18.
[15] Ibídem, párr. 20.
[16] Ibídem, párr. 21.

1. La satisfacción cuando sea pertinente y procedente, deberá incluir la totalidad o parte de las medidas siguientes:

a) Medidas eficaces para conseguir que no continúen las violaciones;
b) La verificación de los hechos y la revelación pública y completa de la verdad, en la medida en que esa revelación no provoque más daños o amenace la seguridad y los intereses de la víctima, de sus familiares, de los testigos o de personas que han intervenido para ayudar a la víctima o impedir que se produzcan nuevas violaciones;
c) La búsqueda de las personas desaparecidas, de las identidades de los niños secuestrados y de los cadáveres de las personas asesinadas, y la ayuda para recuperarlos, identificarlos y volver a inhumarlos según el deseo explícito o presunto de la víctima o las prácticas culturales de su familia y comunidad;
d) Una declaración oficial o decisión judicial que restablezca la dignidad, la reputación y los derechos de la víctima y de las personas estrechamente vinculadas a ella;
e) Una disculpa pública que incluya el reconocimiento de los hechos y la aceptación de responsabilidades;
f) La aplicación de sanciones judiciales o administrativas a los responsables de las violaciones;
g) Conmemoraciones y homenajes a las víctimas;
h) La inclusión de una exposición precisa de las violaciones ocurridas en la enseñanza de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, así como en el material didáctico a todos los niveles.[17]

2. En razón a lo anterior, deberán iniciarse los procedimientos administrativos en contra de la **LIC. PERLA ANGÉLICA VARGAS RAMÍREZ,** Jueza Comunitaria adscrita a la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Zacatecas y al **LIC. PASCUAL VÁZQUEZ PÉREZ**, en su carácter de Fiscal del Ministerio Público de la Unidad Especializada en la Recepción de Detenidos, así como en contra del **C. GERARDO GUADALUPE CAMPOS ALANIZ**, Comandante de Guardia de la Dirección General de la Policía de Investigación, que incurrieron en tales actos, por las violaciones al derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica en relación con el derecho de acceso a la justicia.

C) Las garantías de no repetición.

1. Son aquellas que se adaptan con el fin de evitar que las víctimas vuelvan a ser objeto de violaciones a sus derechos y para contribuir a prevenir o evitar la repetición de actos de la misma naturaleza.

2. A fin de prevenir la violación de los derechos mencionados en párrafos precedentes, resulta indispensable que el H. Ayuntamiento Municipal de Zacatecas, así como la Fiscalía General de Justicia del Estado, realicen los trámites correspondientes ante las instancias respectivas, a efecto de que se capacite de manera constante a todo el personal operativo y administrativo de las corporaciones de la Policía Municipal de Zacatecas y de la Policía de Investigación, así como a los Jueces Comunitarios y Agentes del Ministerio Público, específicamente a la **LIC. PERLA ANGÉLICA VARGAS RAMÍREZ**, Jueza Comunitaria adscrita a la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Zacatecas, al **LIC. PASCUAL VÁZQUEZ PÉREZ**, en su carácter de Fiscal del Ministerio Público de la Unidad Especializada en la Recepción de Detenidos, así como al **C. GERARDO GUADALUPE CAMPOS ALANIZ**, Comandante de Guardia de la Dirección General de la Policía de Investigación, tanto en el conocimiento de sus funciones y en el respeto a los derechos humanos, como en el derecho a la legalidad y seguridad jurídica en relación con el derecho al acceso a la justicia, así como en el conocimiento de los términos y trámites correspondientes para poner a disposición y recibir a las personas detenidas o privadas de libertad, con la finalidad de no volver a reincidir en dichas violaciones.

[17] Ibídem, párr. 22.

X. RECOMENDACIONES.

Por lo anterior, y con fundamento en los 1 y 102 apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 2, 3, 4, 8, 17, 37, 51, 53, 54, 56, 57 y 58 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, se emiten las siguientes Recomendaciones:

PRIMERA. En el plazo máximo de un mes, contado a partir de la notificación de la presente Recomendación, se inscriba en el Registro Estatal de Víctimas, a **Q1**, **M1, M2, O1** y **O2,** en su calidad de víctimas directas de violaciones a sus derechos humanos, a fin de que se garantice su acceso oportuno al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, previsto en la Ley de Atención a Víctimas del Estado de Zacatecas, conforme al contenido del apartado IX de esta Recomendación, debiendo remitir a este Organismo las constancias que acrediten el cumplimiento.

SEGUNDA. En el plazo máximo de tres meses, contados a partir de la notificación de la presente Recomendación, se valore al **Q1, M1, M2**, **O1** y **O2,** y se determine, si las víctimas requieren de atención psicológica, y si es éste su deseo, se dé continuidad con dicho tratamiento hasta su total restablecimiento. Debiendo, remitir a este Organismo, las constancias que acrediten su debido cumplimiento.

TERCERA. En un plazo máximo de tres meses, contados a partir de la aceptación de la presente Recomendación, se instruya a quien corresponda, se capacite a la **LIC. PERLA ANGÉLICA VARGAS RAMÍREZ,** Jueza Comunitaria adscrita a la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Zacatecas, jueces comunitarios y personal de la Dirección de la Policía Preventiva Municipal de Zacatecas, sobre la cultura del respeto a la ley y a los Derechos Humanos, así como en el conocimiento de sus funciones, en los trámites y términos para poner de inmediato a una persona detenida o privada de libertad a disposición del Ministerio Público; del derecho a la legalidad y seguridad jurídica, en relación con el derecho al acceso a la justicia; debiendo sujetarse a los lineamientos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, así como en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte.

CUARTA. En un plazo máximo de tres meses, contados a partir de la aceptación de la presente Recomendación, conforme a sus facultades como Superior Jerárquico, dé indicaciones a quien corresponda, se capacite, al **C. LIC. PASCUAL VÁZQUEZ PÉREZ**, Fiscal del Ministerio Público, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, así como a Agentes del Ministerio Público y elementos de la Dirección de la Policía de Investigación, tanto en el conocimiento de sus funciones y en el respeto a los derechos humanos, como en el derecho a la legalidad y seguridad jurídica, en relación con el derecho al acceso a la justicia, conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al Código Nacional de Procedimientos Penales y los tratados internacionales en la materia de los que el Estado Mexicano sea parte.

QUINTA. En un plazo máximo de tres meses, contados a partir de la aceptación de la presente Recomendación, se instruya por parte de la Contraloría Interna Municipal, el procedimiento administrativo de responsabilidad en contra de la **LIC. PERLA ANGÉLICA VARGAS RAMÍREZ**, Jueza Comunitaria adscrita a la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Zacatecas, por las acciones y omisiones administrativas en que incurrió en perjuicio del agraviado **Q1** y sus familiares citados. Lo anterior a fin de que la servidora pública responsable de las violaciones a los derechos humanos señalados, sea debidamente sancionada y, se envíen las constancias correspondientes del cumplimiento de las sanciones impuestas.

SEXTA. En un plazo máximo de tres meses, contados a partir de la aceptación de la presente Recomendación, se instruya, por el Órgano Interno de Control, el procedimiento administrativo de responsabilidad en contra del **LIC. PASCUAL VÁZQUEZ PÉREZ,** Fiscal del Ministerio Público, de la Fiscalía General de Justicia del Estado y del **C. GERARDO GUADALUPE CAMPOS ALANIZ**, Comandante de Guardia,

de la Dirección General de la Policía de Investigación, al momento de los hechos, por las omisiones administrativas en que incurrieron en perjuicio del agraviado **Q1** y de sus familiares citados. Lo anterior a fin de que los servidores públicos responsables de las violaciones a los derechos humanos señalados, sean debidamente sancionados y, se envíen las constancias correspondientes del cumplimiento de las sanciones impuestas.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 53, párrafo segundo de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, se hace del conocimiento de la autoridad a la que va dirigida esta Recomendación, que dispone de un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente en que ésta se le notifique, para que manifieste si la acepta o no, en el entendido de que, de no aceptarla, su respuesta se hará del conocimiento de la opinión pública. En caso de que la acepte, se le notifica que dispone de un plazo de 15 días, contados a partir del vencimiento del término del que disponía para responder sobre la aceptación, a fin de enviar las pruebas de su cumplimiento.

Por último, hágasele saber a la parte quejosa que, de conformidad con el artículo 61 de la Ley de este Organismo, dispone de 30 días naturales, computados a partir de la fecha de notificación del presente documento, para que en caso de que exista inconformidad con la misma, interponga el recurso de impugnación correspondiente ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Así lo resolvió y firma la Dra. en D. Ma. de la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas.

Así lo determina y firma

DRA. EN D. MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOS
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE ZACATECAS.

Expediente: CDHEZ/042/2020 y CDHEZ/056/2020

Tipo de queja: Oficiosa

Personas agraviadas: VD.

Autoridad responsable:

I. Maestro **AR1**, Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.
II. I.S.C. **AR2**, Director del Centro de Coordinación Integral, Control, Comando y Comunicaciones del Estado C-5 Zacatecas.

Derechos humanos vulnerados:

I. Derecho a la legalidad y seguridad jurídica.
II. Derecho al honor y a la dignidad.
III. Derecho a la imagen.

Zacatecas, Zac., a 10 de septiembre de 2021; una vez concluida la investigación de los hechos que motivaron los expedientes CDHEZ/042/2020 y CDHEZ/056/2020, y analizado el proyecto presentado por la Sexta Visitaduría General, la suscrita aprobó, de conformidad con los artículos 4, 8 fracción VIII, 17 fracción V, 37, 51, 53 y 56 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, en relación con lo dispuesto por los numerales 161 fracción X, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 y 175 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, la **Recomendación 49/2021**, que se dirige a las autoridades siguientes:

- **MAESTRO ARTURO LÓPEZ BAZÁN**, Secretario de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas.

Así como el **Acuerdo de No Responsabilidad,** que se dirige a las siguientes autoridades:

- **L. C. ALEJANDRO TELLO CRISTERNA**, Gobernador Constitucional del Estado de Zacatecas.

- **MAESTRO HÉCTOR ALBERTO ALVARADO GÓMEZ**, Coordinador de Comunicación Social de Gobierno del Estado.

- **INGENIERO ISMAEL CAMBEROS HERNÁNDEZ**, entonces Secretario de Seguridad Pública del Estado.

I. DE LA CONFIDENCIALIDAD.

1. De conformidad con los artículos 6°, apartado A, fracción II y 16, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 23 y 85 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, los datos personales de las peticionarias y agraviadas relacionadas con esta resolución, permanecerán confidenciales, ya que estos no son públicos.

II. RELATORÍA DE LOS HECHOS Y OBJETO DE LA CONTROVERSIA.

1. En fecha 24 de enero de 2020, el Departamento de Orientación y Quejas de este Organismo, con fundamento en el artículo 30, párrafo tercero, de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, así como en el numeral 27, fracción VII, del Reglamento Interno, inició queja de manera oficiosa, derivado de la nota publicada en el medio de comunicación “Página 24”, en fecha [...], con motivo de un escrito elaborado por Colectivas Feministas del Estado de Zacatecas, donde atribuyen violaciones a derechos humanos de sus integrantes.

El 28 de enero de 2020, la queja se remitió a la Sexta Visitaduría General de este Organismo, bajo el número de expediente **CDHEZ/042/2020**, a efecto de formular el acuerdo de calificación de ésta, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 123 y 124 del Reglamento de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas.

El 29 de enero de 2020, la queja se calificó como una presunta violación a los derechos humanos, de conformidad con lo establecido por los artículos 123 y 124 del Reglamento de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas.

Posteriormente, el 05 de febrero de 2020, **VD**, presentó y ratificó escrito de queja ante esta Comisión de Derechos Humanos, como integrante del colectivo “[...]” por actos presuntamente violatorios de sus derechos humanos, los cuales atribuyó al Gobernador del Estado, Secretario de Seguridad Pública, Secretario General de Gobierno, Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública y al Director de Comunicación Social de Gobierno del Estado.

El 06 de febrero de 2020, la queja **CDHEZ/056/2020**, se acumuló a la queja oficiosa **CDHEZ/042/2020**, por tratarse de los mismos hechos.

En fecha 09 de septiembre de 2021, se emitió un acuerdo a través del cual se precisó el superior jerárquico de las autoridades responsables, a las que se dirige la presente Recomendación.

2. Los hechos materia de la queja consistieron en lo siguiente:
Por lo que hace a la queja oficiosa CDHEZ042/2020:
En fecha [...], el medio de comunicación “Página 24”, publicó un escrito enviado por las integrantes del Colectivo Feministas del Estado de Zacatecas, a través del cual denunciaron una campaña de odio en contra este movimiento, ello, derivado de la difusión de un video, en el que se observa a tres mujeres haciendo pintas en protesta contra la violencia feminicida. Videos que refieren, son exclusivos de instituciones de seguridad pública. Por lo que, atribuyen violaciones a los derechos humanos de sus integrantes, los cuales atribuyen al área de Comunicación Social de Gobierno del Estado de Zacatecas.

Por lo que hace a la queja CDHEZ/056/2020:
Por su parte, **VD**, hizo del conocimiento que, el [...], a través de la red social denominada “Facebook”, algunos periodistas y medios de comunicación que trabajan o que tienen convenio con Gobierno del Estado de Zacatecas, difundieron un video captado en el centro de la Ciudad, por las cámaras de seguridad pertenecientes a oficinas de Gobierno del Estado, donde se aprecia […]. Afirmó que dichos videos fueron difundidos con la intención de iniciar una campaña de odio contra el grupo feminista, generando una serie de ataques y agresiones en su contra, a través de mensajes, entre los cuales se incitaba a que les quemaran sus casas y fueran a golpearlas en la calle. De ahí que afirmaron temer por su integridad física, al haber sido expuestos sus rostros. Finalmente, estas violaciones a sus derechos humanos, se las atribuyeron al Gobierno del Estado de Zacatecas.

3. Las autoridades involucradas rindieron los informes correspondientes:

- El 14 de febrero de 2020, rindió informe el **MAESTRO HÉCTOR ALBERTO ALVARADO GÓMEZ**, Coordinador de Comunicación Social del Gobierno del Estado.
- En fecha 19 de febrero de 2020, rindieron sus respectivos informes las siguientes autoridades:
    - **INGENIERO ISMAEL CAMBEROS HERNÁNDEZ**, otrora Secretario de Seguridad Pública.
    - **LICENCIADO SP1**, entonces Director Jurídico de la Secretaría General de Gobierno.
    - **MAESTRO AR1**, Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.
    - **MAESTRO SP2**, Coordinador General Jurídico y Representante Legal del Ejecutivo del Estado de Zacatecas.

III. COMPETENCIA.

1. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas es competente, en términos de los artículos 1º, 4º, 6º, 8º fracción VII, inciso A) y 31 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, en relación con los numerales 15, 22 y 23 de su Reglamento Interno, debido a que la queja se promueve en contra de servidores públicos de Gobierno del Estado de Zacatecas, por hechos ocurridos en enero de 2020.

2. De conformidad con el artículo 124, fracción I del Reglamento Interior de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, este Organismo advierte que, de los hechos materia de la queja, se pudo presumir la violación de los derechos humanos de la parte quejosa y agraviadas, así como la responsabilidad por parte de los servidores públicos señalados.

3. Esta Comisión presumió la violación de los siguientes derechos humanos:
a) Derecho a la legalidad y seguridad jurídica.
b) Derecho al honor y a la dignidad.
c) Derecho a la imagen.

IV. PROCEDIMIENTO ANTE LA COMISIÓN.

Con la finalidad de documentar las presuntas violaciones a derechos humanos, así como para determinar la existencia o no, de responsabilidad por parte de los servidores públicos señalados, este Organismo realizó las siguientes actuaciones:

1. Análisis de notas periodísticas correspondientes al 16 de febrero de 2018:
    - El diario de circulación estatal denominado “Página 24”, publicó un escrito enviado por las integrantes del Colectivo Feministas del Estado de Zacatecas, a través del cual denunciaron presuntas violaciones a los derechos humanos de sus integrantes.

2. Entrevistas a las personas relacionadas con los hechos:
    - En fecha 05 de febrero de 2020, se recabó comparecencia de **VD**, persona quejosa y peticionaria dentro del expediente CDHEZ/056/2020.
    - El 02 de septiembre de 2021, personal adscrito a este Organismo, recabó comparecencia de **SP3**, elemento de Policía Municipal, adscrita a la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Zacatecas, Zacatecas.
    - El 07 de septiembre de 2021, personal adscrito a esta Comisión, recabó comparecencia de **SP4,** elemento de Policía Municipal, adscrita a la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Guadalupe, Zacatecas.

3. Solicitudes de informes y colaboraciones:
    - El 30 de enero de 2020, se solicitó informe de autoridad, al **MAESTRO HÉCTOR ALBERTO ALVARADO GÓMEZ**, Coordinador de Comunicación Social de Gobierno del

Estado.

- El 10 de febrero de 2020, se solicitaron los informes de autoridad siguientes:
  - **MAESTRO SP5**, otrora Secretario General de Gobierno.
  - **MAESTRO HÉCTOR ALBERTO ALVARADO GÓMEZ**, Coordinador de Comunicación Social.
  - **MAESTRO AR1,** Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.
  - **INGENIERO ISMAEL CAMBEROS HERNÁNDEZ,** entonces Secretario de Seguridad Pública.
  - **L. C. ALEJANDRO TELLO CRISTERNA,** Gobernador Constitucional del Estado de Zacatecas.
- El 17 de febrero de 2020, se solicitó informe, en vía de colaboración, al **I.S.C. AR2**, Director del C5.
- El 12 de marzo de 2020, se solicitó informe al **MAESTRO AR1**, Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.
- El 13 de marzo de 2020, se solicitó informe, en vía de colaboración, al **I.SC. AR2**, Director del C5.
- El 26 de octubre de 2020, se solicitó informe complementario al **MAESTRO AR1**, Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

4. Recopilación de información y consulta de documentos:

- El 05 de febrero de 2020, **VD**, presentó escrito de queja ante esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas.
- El 14 de febrero de 2020, rindió informe el **MAESTRO HÉCTOR ALBERTO ALVARADO GÓMEZ**, Coordinador de Comunicación Social.
- En fecha 19 de febrero de 2020, rindieron informe las siguientes autoridades:
  - **INGENIERO ISMAEL CAMBEROS HERNÁNDEZ**, otrora Secretario de Seguridad Pública.
  - **LICENCIADO SP1**, entonces Director Jurídico de la Secretaría General de Gobierno.
  - **MAESTRO AR1**, Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.
  - **MAESTRO SP2**, Coordinador General Jurídico y Representante Legal del Ejecutivo del Estado de Zacatecas.
- En fecha 20 de febrero de 2020, el **MAESTRO HÉCTOR ALBERTO ALVARADO GÓMEZ**, Coordinador de Comunicación Social, rindió informe correspondiente.
- En fecha 13 de marzo de 2020, personal adscrito a esta Institución, recabó acta circunstanciada.
- En fecha 17 de marzo de 2020, rindió informe de autoridad, el **MAESTRO AR1**, Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.
- En fecha 03 de abril de 2020, rindió informe, en vía de colaboración, el **I.S.C. AR2,** Director del C5, en los cuales anexó un CD de las videograbaciones de las cámaras solicitadas y copias simples del incidente [...], que contiene la relatoría de los hechos, respectivamente.
- El 28 de octubre de 2020, se recibió informe en vía de colaboración, suscrito por el **I.S.C. AR2,** Director del Centro de Coordinación Integral, Control, Comando y Comunicaciones del Estado C-5 Zacatecas.
- El 02 de septiembre de 2021, se recibió informe, en vía de colaboración, por parte del Inspector General **LICENCIADO SP6,** Director de la Policía Estatal Preventiva.

5. Recopilación de evidencia *in situ* y actas circunstanciadas:

- El 07 de febrero de 2020, se realizó investigación de campo en el callejón de Las Campanas, zona centro, de Zacatecas, capital.
- El 13 de marzo de 2020, se realizó investigación de campo en las instalaciones del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública del Estado.
- El 17 de marzo de 2020, se realizó inspección del CD que fuera aportado por el

MAESTRO AR1, Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

- El 03 de abril de 2020, personal de este organismo, realizó inspección del CD que fuera aportado por el **I.S.C. AR2,** Director del C-5.
- El 02 de septiembre de 2021, personal adscrito a este Organismo, recabó acta circunstanciada de llamada telefónica al C-5.
- El 02 de septiembre de 2021, personal adscrito a esta Comisión de Derechos Humanos, recabó acta circunstanciada de llamada telefónica de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Guadalupe, Zacatecas.
- El 07 de septiembre de 2021, personal adscrito a este Organismo, recabó acta circunstanciada de entrevista con el **I.S.C. AR2,** Director del C-5.
- El 08 de septiembre de 2021, personal adscrito a este Organismo, recabó acta circunstanciada.
- El 09 de septiembre de 2021, personal adscrito a esta Comisión, recabó acta circunstanciada, respecto de entrevista efectuada con el Secretario General de Gobierno del Estado.
- El 09 de septiembre de 2021, personal adscrito a este Organismo, suscribió un acuerdo mediante el cual se precisó el superior jerárquico de las autoridades responsables a las que se dirige la presente Recomendación.

V. PRUEBAS.

Con base en lo estipulado en los artículos 48 y 49 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, en relación con los numerales 150, 151, 152, 153, 154 y 155 del Reglamento Interior de este Organismo, durante el procedimiento realizado por esta Institución, se recabaron los elementos probatorios documentales que a continuación, se detallan:

VI. CONSIDERACIÓN PREVIA:

1. Previo a emitir pronunciamiento respecto de los hechos materia de investigación, así como de la participación de las autoridades que fueron denunciadas por presuntas vulneraciones a derechos humanos, esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, no soslaya que es facultad del Estado construir un eficaz estado de derecho, concebido no sólo como aquel que fundamenta su actuar en la sujeción a las leyes positivas dictadas por organismos legalmente constituidos, sino manifestado como una estructura constitucional y un conjunto de procedimientos tendentes a garantizar los derechos fundamentales de las personas y los ciudadanos para evitar los excesos del poder y el uso de la fuerza pública.

2. En ese sentido, la seguridad, en términos generales, puede entenderse como el hecho de estar libre de todo riesgo, daño o peligro. Un orden jurídico justo representa la seguridad del Estado, tanto para otorgar seguridad jurídica como pública, que a su vez implica la creación de organismos e instituciones sólidas capaces de flexibilizarse en la dinámica de los cambios sociales. La seguridad pública constituye un aspecto esencial de la seguridad integral del Estado.

3. Por tanto, la seguridad pública es concebida como una función que comprende las actividades ejecutivas de **prevención**, encaminadas a disminuir las infracciones y delitos, las acciones de procuración de justicia, de investigación y persecución de los delitos, el enjuiciamiento y las sanciones de las personas que delinquen, así como aquellas vinculadas con su readaptación social.

4. La seguridad pública, también es concebida como la actividad encomendada al Estado para salvaguardar los intereses de la sociedad, para lo cual, en los últimos años, las instituciones del gobierno encargadas de la protección de los ciudadanos han integrado la utilización de nuevas tecnologías para la seguridad pública.

5. Estos sistemas tecnológicos han ayudado a estas instituciones a prevenir y a detectar hechos delictivos, proteger a las personas y a vigilar lugares abiertos y espacios públicos, a través de la videovigilancia.

6. Es sabido que con la grabación de imágenes y sonidos se ha proporcionado a los cuerpos de seguridad pública, elementos para la prevención y para que se puedan utilizar como prueba plena los documentos fílmicos que muestran hechos ilícitos, dando así mayor protección a los bienes públicos y privados.

7. La regulación entre la facultad del Estado para obtener información a través de las grabaciones de imágenes y sonido y los derechos de las personas como la privacidad y la propia imagen, tuvo que ser regulado mediante instrumentos legislativos a fin de que justamente, no fueran perturbados éstos últimos, por los excesos en que puedan incurrir con el uso o manejo de los materiales videográficos obtenidos por los cuerpos de seguridad.

8. Pues, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 6°, párrafo segundo, fracción II, establece que la información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.

9. En ese sentido, para proporcionar protección a la ciudadanía, el Estado tiene que utilizar la tecnología, sin realizar un uso inadecuado de la misma, pues de lo contrario, puede actualizarse la intromisión en la vida privada y vulnerar derechos humanos como el honor, la intimidad o la imagen propia.

10. Por ello, a través de la Ley de Videovigilancia para el Estado de Zacatecas[1], se sentaron las bases para que, en esta entidad federativa, el sistema de videovigilancia pudiera estar localizadas estratégicamente e interconectadas entre sí, para que permitan apoyar la operación y despliegue policial, la atención de emergencias, la prevención del delito y la procuración de justicia.

11. En la exposición de motivos de la Ley en cita, se hizo el señalamiento que, aun y cuando el entonces centro de control, comando, comunicaciones y cómputo C-4, se creó desde el año 2013, con la finalidad de prever y atender de manera precisa los reportes de siniestros accidentes y robos ilícitos (sic), a través de un sistema de cámaras de vigilancia en la zona metropolitana ya fueran de particulares o aquellos operados por organismos de gobierno, no existía un ordenamiento jurídico que los regulara, a fin de evitar que las cámaras públicas y privadas que se utilizaban para inhibir la comisión de delitos, se conviertan en un factor de riesgo, si se empleaban a favor del crimen organizado, si éste se infiltra en dicho sistema o en su caso si la delincuencia opera un sistema propio para delinquir.

12. El espíritu de la Ley de marras, era, además, que se garantizara la confidencialidad, integridad, seguridad y funcionalidad de la información generada por los equipos y sistemas de video vigilancia, así como la protección de los datos de los ciudadanos que pudieran considerarse afectados. Así, la regulación del uso de video cámaras instaladas en los lugares públicos abiertos o cerrados que captaran imágenes y sonidos, tenía que garantizar los derechos fundamentales como la privacidad, el honor y la propia imagen, además de garantizar el uso de esos instrumentos para inhibir acciones ilícitas en territorio del Estado.

13. Por tanto, la Ley de Videovigilancia para el Estado de Zacatecas, fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 22 de agosto de 2018, y entró en vigor 180 días posteriores a su publicación. Esta Ley establece[2] que su objeto es regular la ubicación, instalación, utilización y operación de videocámaras y sistemas de videovigilancia, que graben o capten imágenes con o sin sonido en lugares públicos o en lugares privados de acceso

[1] Publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 22 de agosto de 2018
[2] Con la reforma efectuada el 06 de febrero de 2021, no se modificó el objeto de la Ley de Videovigilancia para el Estado de Zacatecas.

público; así como su posterior tratamiento de manera exclusiva por las instituciones de seguridad pública, por otras autoridades en los inmuebles a su disposición o por Prestadores del Servicio de Seguridad Privada[3].

14. En la Ley de Videovigilancia para el Estado de Zacatecas, publicada el 22 de agosto de 2018, se estableció que la videovigilancia en materia de Seguridad Pública estaría a cargo del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, el cual llevaría el control de la red estatal de videovigilancia por conducto del Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo del Estado de Zacatecas[4]. Lo anterior fue modificado mediante la reforma del 06 de febrero de 2021, en donde se precisa que, actualmente, la videovigilancia en materia de Seguridad Pública estaría a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública, la cual llevaría el control de la red estatal de videovigilancia por conducto del Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia[5], C-5.

15. Entonces, para este Organismo queda claro que es una facultad legal del Estado instalar cámaras de video vigilancia a fin de actuar dentro del marco de la seguridad pública; sin embargo, también queda claro que esta facultad tiene límites, entre ellos, el respeto a los derechos humanos, tales como la privacidad, el honor y la propia imagen. Incluso, así quedó asentado en el instrumento legal, en el artículo 4°, para lo cual se reguló el uso de la información, la administración y destino de la información, los derechos de los particulares e, incluso, las sanciones que se deberán aplicar en caso de incumplimiento de la Ley.

16. Por tanto, al tenor de los razonamientos anteriores, este Organismo protector de los derechos humanos, procede a realizar el análisis de los derechos que le asisten a la quejosa, a la luz de las facultades y límites del Estado para videograbar, pues la utilización de las grabaciones, no deben lesionar los derechos y libertades que se encuentran reconocidos en la Constitución y Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos, en los que México forma parte.

VII. ACUERDO DE NO RESPONSABILIDAD.

1. De las pruebas expuestas en el apartado correspondiente, con especial énfasis en la respuesta proporcionada a esta Comisión por parte de las autoridades responsables, este Organismo documentó que el video difundido en medios de comunicación y redes sociales donde aparece **VD**, corresponde a las cámaras de seguridad del Gobierno del Estado de Zacatecas.

2. Sin embargo, según lo establece la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, el ejercicio del Poder Ejecutivo se deposita en un ciudadano denominado Gobernador del Estado, quien tendrá las atribuciones y obligaciones que le confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la propia del Estado, la referida Ley y las demás disposiciones que de ellas emanen. Y éste a su vez, se auxiliará de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública de acuerdo con lo que establece la Ley.

3. Algunas de las dependencias que integran la Administración Centralizada del Ejecutivo del Estado son, la Secretaría General de Gobierno y la Secretaría de Seguridad Pública. En ese sentido a correspondido a ambas Secretarías, en diferentes momentos, el control de la red estatal de videovigilancia por conducto del C-5.

4. Entonces, según lo establecía la Ley de Videovigilancia para el Estado de Zacatecas, vigente en el momento de los hechos[6], del artículo 2, se desprendía que la videovigilancia en materia de Seguridad Pública estaba a cargo del **Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de**

[3] Artículo 1°
[4] Artículo 2
[5] Artículo 2, de la Ley de Videovigilancia para el Estado de Zacatecas, vigente
[6] Publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 22 de agosto de 2018

Seguridad Pública, quien llevaba el control de la red estatal de videovigilancia por conducto del **Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo del Estado de Zacatecas**. Mientras que en el numeral 3, fracción VI, establecía que el Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública, es un Órgano Desconcentrado de la **Secretaría General de Gobierno.**

5. Luego, con la reforma del 06 de febrero de 2021, esta Ley, en el mismo numeral, refiere que la videovigilancia en materia de Seguridad Pública está a cargo de la **Secretaría de Seguridad Pública**, la cual llevará el control de la red estatal de videovigilancia por conducto del Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia.

6. Por tal motivo, es factible constatar que el manejo y resguardo de dichas videograbaciones correspondía, en el momento de los hechos, al Órgano Desconcentrado de la Secretaría General de Gobierno, Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, quien, por conducto del Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo del Estado de Zacatecas, llevaba el control de la red estatal de videovigilancia. Esto fue corroborado por las autoridades a quienes les fue requerido el informe de autoridad.

7. Lo anterior trasciende en virtud de que, en la queja oficiosa CDHEZ/042/2020, se tuvo como autoridad presuntamente responsable al **MAESTRO HÉCTOR ALBERTO ALVARADO GÓMEZ**, Coordinador de Comunicación Social de Gobierno del Estado. Luego, en la queja CDHEZ/056/2020, presentada por **VD** como integrante del Colectivo Feminista “[...]”, los hechos fueron atribuidos a diversas autoridades de carácter estatal, entre ellos, al **MAESTRO HÉCTOR ALBERTO ALVARADO GÓMEZ**, Coordinador de Comunicación Social de Gobierno del Estado; al entonces Secretario de Seguridad Pública del Estado **INGENIERO ISMAEL CAMBEROS HERNÁNDEZ**, así como al Gobernador Constitucional del Estado **L. C. ALEJANDRO TELLO CRISTERNA.**

8. Por tal motivo, aun y cuando, según el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, **los Estados** y los Municipios, que comprende la **prevención de los delitos**, la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas y que la actuación de las instituciones de seguridad pública se regirán por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos. Cierto es también que, a través de la delegación de funciones o de competencia, se transfiere el ejercicio de todo o parte de la misma a un órgano inferior, en este caso, el control de la red estatal de videovigilancia por conducto del entonces Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo del Estado de Zacatecas, inicialmente estaba en manos de la Secretaría General de Gobierno a través de su Órgano Desconcentrado, Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública. Luego, derivado de las reformas del 06 de febrero de 2021 a la Ley de Videovigilancia para el Estado de Zacatecas, y del 07 de julio de 2021 a la Ley Orgánica de la Administración Pública y Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, ambas del Estado de Zacatecas, esta función le fue conferida a la Secretaría de Seguridad Pública, materializándose la entrega del Secretariado Ejecutivo, hasta el día 08 de septiembre de 2021.

9. Corolario de lo anterior, una vez que se cuenta con un panorama claro de a qué autoridad le correspondía el control de la red estatal de videovigilancia, ubicada en el territorio zacatecano, el presente instrumento analizará los hechos materia de las quejas, únicamente enfocados en las obligaciones, funciones y facultades que al respecto tenían el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública y el Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo del Estado de Zacatecas.

10. Por los razonamientos anteriores, toda vez que ha quedado claro a qué autoridad del Estado le corresponde regular la ubicación, instalación, utilización y operación de videocámaras y sistemas de videovigilancia, así como su posterior tratamiento, como es el uso, administración y destino de la información obtenida, dentro de la cual se encuentra la protección de los derechos de los particulares e incluso las sanciones aplicables a quienes incumplan con la Ley de Videovigilancia para el Estado de Zacatecas, lo procedente, por técnica jurídica y en obvio

de razones, es emitir el **ACUERDO DE NO RESPONSABILIDAD** en favor de las autoridades a quienes se les atribuyó la violación a los derechos humanos de **VD**, siendo éstas las siguientes:

- **MAESTRO HÉCTOR ALBERTO ALVARADO GÓMEZ**, Coordinador de Comunicación Social de Gobierno del Estado
- **INGENIERO ISMAEL CAMBEROS HERNÁNDEZ**, entonces Secretario de Seguridad Pública del Estado
- **L. C. ALEJANDRO TELLO CRISTERNA**, Gobernador Constitucional del Estado**.**

VIII. PRECISIÓN DEL SUPERIOR JERÁRQUICO DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES

1. Los hechos materia de la presente Recomendación se suscitaron el [...], fecha en la cual, atendiendo al artículo 2° de la ley de Videovigilancia para el Estado de Zacatecas, la videovigilancia en materia de Seguridad Pública estaba a cargo del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, quien llevaba el control de la red estatal de videovigilancia por conducto del Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo del Estado de Zacatecas, entendido el primero como un Órgano Desconcentrado de la Secretaría General de Gobierno, según lo establecido en el numeral 3, fracción VI de la Ley en cita.

2. Luego, el 06 de febrero de 2021, me emitió el decreto por el que se reformó la Ley de Videovigilancia para el Estado de Zacatecas, estableciéndose en el referido ordinal 2° que la videovigilancia en materia de Seguridad Pública estará a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública, la cual llevará el control de la red estatal de videovigilancia por conducto del Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia. Mientras que el artículo 3, fracción VI, quedó incólume, al continuar estableciendo que el Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública, es un Órgano Desconcentrado de la Secretaría General de Gobierno.

3. Ahora bien, el 07 de julio de 2021, se publicó en el Periódico Oficial, Órgano de Gobierno del Estado, el Decreto No. 671, por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas y de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Zacatecas, en materia del Secretariado Ejecutivo. El propósito central de la reforma consistió en otorgarle a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, la facultad de operar el Sistema Estatal de Seguridad Pública, a través del Secretariado Ejecutivo.

4. Si bien es cierto, la referida reforma entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado, es decir, el 08 de julio de 2021. Atendiendo al artículo segundo, transitorio, sería dentro de los 120 días siguientes a la vigencia de este Decreto, que se modificarían los reglamentos interiores de la Secretaría General de Gobierno y de la Secretaría de Seguridad Pública, para armonizarlos a esa reforma. Y, por lo que hace a la entrega recepción relativa al Secretariado Ejecutivo entre la Secretaría General de Gobierno y la Secretaría de Seguridad Pública, ambas del Gobierno del Estado, se llevaría a cabo de acuerdo con la Ley de Entrega-Recepción del Estado y Municipios de Zacatecas y demás leyes y reglamentos aplicables. Sin que se establezca el plazo en el que deberá realizarse la entrega formal y material del Secretariado Ejecutivo.

5. Atendiendo a lo anterior, una vez que se acreditaron fehacientemente las vulneraciones a los derechos humanos de **VD**, así como la responsabilidad del **MAESTRO AR1**, Titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, y del **I.S.C. AR2**, Director del Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia, el 08 de septiembre de 2021, este Organismo protector de los Derechos Humanos, emitió la Recomendación 49/2021, misma que se dirigió a la Secretaría General de Gobierno y a la Secretaría de Seguridad Pública, ambas de Gobierno del Estado, pues, hasta esa fecha, no se había materializado la entrega-recepción del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, a esta última.

6. No fue sino hasta el 09 de septiembre de 2021, que, al pretender notificar al Secretario General de Gobierno del Estado, personal adscrito a este Organismo fue informado de que el día anterior, 08 de septiembre de 2021, se materializó la entrega formal del Secretariado Ejecutivo por parte de la Secretaría General, a la Secretaría de Seguridad Pública.

7. Derivado de ello, el 09 de septiembre de 2021, se emitió el acuerdo siguiente:

> **"ÚNICO.** La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas determina dirigir la Recomendación No. 49/2021, a la Secretaría de Seguridad Pública, en su calidad de superior jerárquico del titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública y del titular del Centro de Coordinación, Comando, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia C-5, y no así, de la Secretaría General de Gobierno, en razón a que, a partir del ocho de septiembre de dos mil veintiuno, se formalizó y materializó la entrega – recepción del Secretariado Ejecutivo a la primera éstas. De ahí, que no pueda considerarse ya a la Secretaría General de Gobierno, como superior jerárquico de las autoridades señaladas responsables. En consecuencia, es dable precisar dentro de la resolución emitida en razón del expediente CDHEZ/042/2020 y su acumulado CHEDZ/056/2020, el superior jerárquico de las autoridades responsables a las que ésta deberá dirigirse."

8. En cumplimiento al acuerdo referido, lo procedente es modificar la Recomendación 49/2021, para precisar que el superior jerárquico de la autoridad responsable a quien se dirige el presente instrumento recomendatorio, y a quien le corresponde atenderla, es al Secretario de Seguridad Pública del Estado, por ser éste de quien dependen las autoridades responsables, es decir, los titulares del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública y del Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia.

IX. SOBRE LOS DERECHOS VULNERADOS

A) Derecho a la legalidad y seguridad jurídica.

1. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) establece que en nuestro país todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la propia Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte. De igual forma, la Carta Magna establece que las normas relativas a los derechos humanos deberán interpretarse a partir de los principios de interpretación conforme y pro persona.

2. En este sentido, la interpretación conforme implica que todas las autoridades del Estado mexicano deben interpretar las leyes a la luz y conforme a los derechos humanos previstos en la constitución y tratados internacionales, mientras que en sentido estricto implica que cuando existan varias interpretaciones válidas, preferirá aquella que sea acorde a la norma constitucional y a los instrumentos internacionales[7]. Por otra parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha entendido que el principio pro persona busca maximizar la vigencia y el respeto de los derechos humanos y permite "optar por la aplicación o interpretación de la norma que favorezca en mayor medida, o bien, que implique menores restricciones a su ejercicio[8]".

3. Asimismo, el tercer párrafo del artículo 1° de la CPEUM establece que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias tienen las obligaciones generales de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos y consecuencialmente los deberes especiales de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos, todo lo cual debe ser realizado de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

---

7 Consultar, Caballero, José Luis (coord.), Sánchez Cordero, Olga, "El Control de Constitucionalidad en México, a partir de la Reforma de junio de 2011", Derechos constitucionales e internacionales, Perspectivas, Retos y Debates, México, Tirant lo Blanch, 2018, pp.930-931.

8 Ver Tesis 1ª. CCCXXVII/2014 (10ª.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Tomo I, Octubre de 2014.

4. Así, la seguridad jurídica “es la certeza que debe tener el gobernado de que su persona, sus papeles, su familia, sus posesiones o sus derechos serán respetados por la autoridad, si ésta debe afectarlos, deberá ajustarse a los procedimientos previamente establecidos en las normas jurídicas”, lo anterior, de acuerdo a lo publicado por el Poder Judicial de la Federación, en conjunto con la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

5. La seguridad jurídica, materializa a su vez el principio de legalidad, el cual es un atributo que tiene toda persona a vivir dentro de un Estado de Derecho, lo que significa que, existe un ordenamiento jurídico que impone límites de las atribuciones de cada autoridad y su actuación no se debe regir de ninguna manera de forma arbitraria, sino que ésta debe circunscribirse a la disposición contenida en los artículos 14 y 16 constitucionales; entonces, la observancia de la ley se convierte en el principio básico que debe garantizar y dar certeza a la vida pública.

6. La importancia de este derecho radica además en la confianza que se deposita en las autoridades, pues las personas deben tener la tranquilidad de que la actuación de los entes públicos no es discrecional y que sus actos se ajustarán estrictamente a lo que precisan las normas concretas.

7. En relación con el derecho a la legalidad, debe decirse que se refiere a todo aquello que tiene la “cualidad de legal”. Ahora bien, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, define a la legalidad como el principio con el que cuentan las “autoridades del Estado para poder actuar cuando la ley se los permite, en la forma y términos que la misma determina, de tal manera que esta garantía concierne a la competencia del órgano del Estado como la suma de facultades que la ley le da para ejercer ciertas atribuciones”.

8. Es evidente que existe una relación de interdependencia entre el derecho a la seguridad jurídica y el derecho a la legalidad, ya que ambos son complementarios el uno con el otro, puesto que la seguridad jurídica engloba el conocimiento de nuestros derechos y obligaciones y el derecho a la legalidad, ordena que esos derechos y obligaciones estén apegados a una norma jurídica que le permita su aplicación, por lo que no puede existir la seguridad jurídica, sin el principio de legalidad.

9. En el Sistema Universal de Derechos Humanos, el derecho a la seguridad jurídica y a la legalidad se encuentran reconocidos tanto en la Declaración Universal de Derechos Humanos como en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al señalarse que ninguna persona puede ser objeto de injerencias arbitrarias en su vida, familia, derechos, posesiones, etcétera.

10. Por su parte, en el Sistema Interamericano, ambos derechos se consagran en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al señalarse que todas las personas tenemos derecho a la protección de la ley contra actos que tengan injerencias arbitrarias en su honra, reputación, vida privada y familiar, así como en su libertad.

11. Como se refirió anteriormente, en el sistema jurídico nacional, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consagra en sus artículos 14 y 16 el derecho a la seguridad jurídica y a la legalidad, al establecer que todos los actos de autoridad que causen molestias en las personas, así como en sus papeles o posesiones, deben de estar previstos en las leyes, es decir, deben de estar fundados y motivados, que a su vez significa contener el sustento legal y las razones que justifiquen su actuar.

12. Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señaló que el principio de legalidad se cumple cuando de los hechos, se permita realizar la procedencia para la aplicación de determinada norma jurídica, lo cual, legitimará el actuar de la autoridad en uno u otro sentido:

> “**FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU CUMPLIMIENTO CUANDO SE TRATE DE ACTOS QUE NO TRASCIENDAN, DE MANERA INMEDIATA, LA ESFERA JURÍDICA DE LOS PARTICULARES.** Tratándose de actos que no trascienden de

> manera inmediata la esfera jurídica de los particulares, sino que se verifican sólo en los ámbitos internos del gobierno, es decir, entre autoridades, el cumplimiento de la garantía de legalidad tiene por objeto que se respete el orden jurídico y que no se afecte la esfera de competencia que corresponda a una autoridad, por parte de otra u otras. En este supuesto, la garantía de legalidad y, concretamente, la parte relativa a la debida fundamentación y motivación, se cumple: a) Con la existencia de una norma legal que atribuya a favor de la autoridad, de manera nítida, la facultad para actuar en determinado sentido y, asimismo, mediante el despliegue de la actuación de esa misma autoridad en la forma precisa y exacta en que lo disponga la ley, es decir, ajustándose escrupulosa y cuidadosamente a la norma legal en la cual encuentra su fundamento la conducta desarrollada; y b) Con la existencia constatada de los antecedentes fácticos o circunstancias de hecho que permitan colegir con claridad que sí procedía aplicar la norma correspondiente y, consecuentemente, que justifique con plenitud el que la autoridad haya actuado en determinado sentido y no en otro. A través de la primera premisa, se dará cumplimiento a la garantía de debida fundamentación y, mediante la observancia de la segunda, a la de debida motivación."[9]

13. En ese mismo sentido, los Órganos del Máximo Tribunal en el País, a través de su criterio orientador, ha dispuesto que el principio de legalidad constituye una garantía del derecho humano a la seguridad jurídica. De ahí que, aquellos, los actos realizados por las autoridades, sin estar sustentados en una norma jurídica, se considerarán arbitrarios.

> "**PRINCIPIO DE LEGALIDAD. CARACTERÍSTICAS DE SU DOBLE FUNCIONALIDAD TRATÁNDOSE DEL ACTO ADMINISTRATIVO Y SU RELACIÓN CON EL DIVERSO DE INTERDICCIÓN DE LA ARBITRARIEDAD Y EL CONTROL JURISDICCIONAL.** Del artículo 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierten los requisitos de mandamiento escrito, autoridad competente y fundamentación y motivación, como garantías instrumentales que, a su vez, revelan la adopción en el régimen jurídico nacional del principio de legalidad, como una garantía del derecho humano a la seguridad jurídica, acorde al cual las autoridades sólo pueden hacer aquello para lo que expresamente les facultan las leyes, en el entendido de que éstas, a su vez, constituyen la manifestación de la voluntad general. Bajo esa premisa, el principio mencionado tiene una doble funcionalidad, particularmente tratándose del acto administrativo, pues, por un lado, impone un régimen de facultades expresas en el que todo acto de autoridad que no represente el ejercicio de una facultad expresamente conferida en la ley a quien lo emite, se considerará arbitrario y, por ello, contrario al derecho a la seguridad jurídica, lo que legitima a las personas para cuestionar la validez de un acto desajustado a las leyes, pero, por otro, bajo la adopción del mismo principio como base de todo el ordenamiento, se genera la presunción de que toda actuación de la autoridad deriva del ejercicio de una facultad que la ley le confiere, en tanto no se demuestre lo contrario, presunción de legalidad ampliamente reconocida tanto en la doctrina como en la legislación nacional. Así, el principio de legalidad, apreciado en su mayor amplitud, da cabida al diverso de interdicción de la arbitrariedad, pero también conlleva que éste opere a través de un control jurisdiccional, lo que da como resultado que no basta que el gobernado considere que determinado acto carece de fundamentación y motivación para que lo estime no obligatorio ni vinculante o lo señale como fuente de un derecho incontrovertible a una sentencia que lo anule, sino que, en todo caso, está a su cargo recurrir a los órganos de control a hacer valer la asumida ausencia o insuficiencia de fundamento legal y motivación dentro de dicho procedimiento y, a su vez, corresponderá a la autoridad demostrar que el acto cuestionado encuentra sustento en una facultad prevista por la norma, so pena de que sea declarado contrario al derecho a la seguridad jurídica, lo que revela que los procedimientos de control jurisdiccional, constituyen la última garantía de verificación del respeto al derecho a la seguridad jurídica, cuyas reglas deben ser conducentes y congruentes con ese propósito."[10]

---

[9] **Registro digital:** 192076, **Instancia:** Pleno, **Novena Época, Materia(s):** Constitucional, **Tesis:** P./J. 50/2000, **Fuente:** Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de 2000, página 813, **Tipo:** Jurisprudencia

[10] **Registro digital:** 2005766, **Instancia:** Tribunales Colegiados de Circuito, **Décima Época, Materia(s):** Constitucional, Común **Tesis:** IV.2o.A.51 K (10a.), **Fuente:** Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo III, página 2239, **Tipo:** Aislada

14. Así entonces, la estructura jurídica del derecho a la legalidad implica un derecho subjetivo consistente en la satisfacción de la expectativa a no ser víctima de una inadecuada u omisa aplicación de la ley que traiga como consecuencia un perjuicio; como contrapartida, supone cumplir comportamientos obligatorios para la autoridad, sean éstos conductas de acción u omisión, y prohibir que se lleven a cabo.

15. El bien jurídico protegido por el derecho a la legalidad es la observancia adecuada del orden jurídico por parte del Estado, entendiendo por éste la permanencia en un estado de disfrute de los derechos concebidos en el ordenamiento jurídico, sin que se causen perjuicios indebidos como resultado de una deficiente aplicación.

16. Al respecto, las funciones y facultades de la autoridad a quien se dirige la presente Recomendación, se encuentran establecidas en la Ley de Videovigilancia para el Estado de Zacatecas, la cual establece como objeto la regulación de la ubicación, instalación, **utilización y operación de videocámaras y sistemas de videovigilancia,** que graben o capten imágenes con o sin sonido en lugares públicos o en lugares privados de acceso público; así como **su posterior tratamiento de manera exclusiva por las instituciones de seguridad pública**, por otras autoridades en los inmuebles a su disposición o por Prestadores del Servicio de Seguridad Privada[11].

17. En la referida legislación, publicada el 22 de agosto de 2018, se estableció que la videovigilancia en materia de Seguridad Pública estaría a cargo del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, quien llevaría el control de la red estatal de videovigilancia por conducto del Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo del Estado de Zacatecas[12].

18. Mientras que el artículo 17 de la Ley de Videovigilancia para el Estado de Zacatecas, establece que la información integrada por las imágenes y sonidos captados por los equipos y sistemas de videovigilancia, sólo podrá ser utilizada en los siguientes casos: I. Prevención de delitos, a través de la generación de inteligencia y de las herramientas para la toma de decisiones de las autoridades en materia de seguridad pública; II. Investigación y persecución de delitos, sobre la información que las autoridades en materia de seguridad pública deben poner a disposición de la autoridad ministerial, para sustentar una detención, puesta a disposición o por requerimiento de ésta; al constar que en la información existe la comisión de un acto delictivo; III. La prevención de conductas ilícitas por parte del C4 (sic) y, en su caso, para la sanción de faltas administrativas, así como para la toma de decisiones en la materia, y IV. Reacción inmediata, a través de los procedimientos que establezcan las autoridades correspondientes, para actuar de forma pronta y eficaz en los casos en los que, a través de la información obtenida por los equipos y sistemas de videovigilancia, se observe la comisión de un delito o falta administrativa y se esté en posibilidad jurídica y material de asegurar al presunto responsable.

19. Esa misma legislación prevé que **la información integrada por las imágenes y sonidos captados** por los equipos y sistemas de videovigilancia, no podrá obtenerse, clasificarse, custodiarse, o utilizarse como medio de prueba, cuando se clasifique, analice, custodie o utilice en contravención de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas; o se violente el derecho a la vida privada de las personas, entre otras hipótesis[13]. Respecto a la **administración y destino que debe tener la información obtenida**, establece que debe registrarse, clasificarse y tratarse de conformidad con lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados, ambas del Estado de Zacatecas[14].

20. En este punto, se hace necesario recordar que, en la exposición de motivos de la Ley de

[11] Artículo 1°
[12] Artículo 2
[13] Ley de Videovigilancia para el Estado de Zacatecas, artículo 18, fracciones I y II
[14] Ídem, artículo 22

Videovigilancia para el Estado de Zacatecas, se estableció que se garantizaría la confidencialidad, integridad, seguridad y funcionalidad de la información generada por los equipos y sistemas de video vigilancia, así como la protección de los datos de los ciudadanos que pudieran considerarse afectados. Regulando el uso de video cámaras instaladas en los lugares públicos abiertos o cerrados que captaran imágenes y sonidos, a fin de garantizar los derechos fundamentales de las personas como la privacidad, el honor y la propia imagen.

21. Por tanto, debemos atender, en un primer momento, al contenido de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, que establece que son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a su información **y proteger los datos personales que obren en su poder**: cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo, Judicial y de los Municipios, organismos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos y de asociaciones civiles, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito estatal y municipal.[15] Asimismo, que los sujetos obligados deberán cumplir con la obligación de proteger y resguardar la información clasificada como reservada o confidencial[16].

22. Entonces, podrá clasificarse como información reservada, la publicación que pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física; así como las previstas en tratados internacionales[17]. Mientras que la clasificación de información confidencial es aquella que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable. La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello[18]. Esta Ley establece que, en lo referente a la información confidencial se estará a lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Zacatecas.

23. Por tanto, la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Zacatecas, estipula que son sujetos obligados por esa Ley, en el ámbito estatal y municipal, cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, ayuntamientos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos del Estado de Zacatecas[19], y que uno de sus objetivos es proteger los datos personales en posesión de cualquiera de las autoridades, entidades, órganos y organismos señalados. Entendiendo por datos personales cualquier información concerniente a una persona física **identificada o identificable**, considerando que una persona es identificable **cuando su identidad pueda determinarse directa o indirectamente a través de cualquier información**, los datos personales se clasifican como, datos personales sensibles, siendo éstos los que refieren a la esfera más íntima de su titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. De manera enunciativa mas no limitativa la ley en comento considera como datos sensibles los datos personales que puedan revelar aspectos como origen racial o étnico, estado de salud presente o futuro, información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, opiniones políticas y preferencia sexual; y datos personales biométricos, **los rasgos físicos**, biológicos o de comportamiento de un individuo que lo identifican como único del resto de la población; huellas dactilares, geometría de la mano, análisis del iris, análisis de retina, venas del dorso de la mano, rasgos faciales, patrón de voz, firma manuscrita, dinámica de tecleo, cadencia del paso al caminar, análisis gestual y análisis del ADN[20].

24. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha referido en varias tesis a los rasgos característicos de la noción de lo "privado". Así, lo ha relacionado con: lo que no constituye vida pública; el ámbito reservado frente a la acción y el conocimiento de los demás; lo que se desea compartir únicamente con aquellos que uno elige; las actividades de las

---

[15] Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, artículo 23
[16] Ídem, artículo 24, fracción VII
[17] Ídem, artículo 82, fracciones I y IX *in fine*.
[18] Ibídem, artículo 85
[19] Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Zacatecas, artículo 1, párrafo cuarto
[20] Ídem artículo 3, fracción VIII, incisos a y b

personas en la esfera particular, relacionadas con el hogar y la familia; o aquello que las personas no desempeñan con el carácter de servidores públicos. Por otro lado, el derecho a la vida privada (o intimidad) está reconocido y protegido en declaraciones y tratados de derechos humanos que forman parte del orden jurídico mexicano, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 12), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 17), la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo11) y la Convención sobre los Derechos del Niño (artículo16). Al interpretar estas disposiciones, los organismos internacionales han destacado que la noción de vida privada atañe a la esfera de la vida en la que las personas pueden expresar libremente su identidad, ya sea en sus relaciones con los demás o en lo individual, y han destacado su vinculación con un amplio abanico de otros derechos, como la inviolabilidad de la correspondencia y de las comunicaciones en general, la inviolabilidad del domicilio, las garantías respecto de los registros personales y corporales, las relacionadas con la recopilación y registro de información personal en bancos de datos y otros dispositivos; el derecho a una vivienda adecuada, a la salud y a la igualdad; los derechos reproductivos, o la protección en caso de desalojos forzados. Las afirmaciones contenidas en las resoluciones nacionales e internacionales son útiles en la medida en que no se tomen de manera descontextualizada, emerjan de un análisis cuidadoso de los diferentes escenarios jurídicos en los que la idea de privacidad entra en juego y no se pretenda derivar de ellas un concepto mecánico de vida privada, de referentes fijos e inmutables. Lo único que estas resoluciones permiten reconstruir, en términos abstractos, es la imagen general que evoca la idea de privacidad en nuestro contexto cultural.[21]

25. Según esta noción, las personas tienen derecho a gozar de un ámbito de proyección de su existencia que quede reservado de la invasión y la mirada de los demás, que les concierna sólo a ellos y les provea de condiciones adecuadas para el despliegue de su individualidad -para el desarrollo de su autonomía y su libertad-. A un nivel más concreto, la misma idea puede describirse apelando al derecho de las personas a mantener fuera del conocimiento de los demás (o, a veces, dentro del círculo de sus personas más próximas) ciertas manifestaciones o dimensiones de su existencia (conducta, datos, información, objetos) y al correspondiente derecho a que los demás no las invadan sin su consentimiento. En un sentido amplio, entonces, **la protección constitucional de la vida privada implica poder conducir parte de la vida de uno protegido de la mirada y las injerencias de los demás**, y guarda conexiones de variado tipo con pretensiones más concretas que los textos constitucionales actuales reconocen a veces como derechos conexos: el derecho de poder tomar libremente ciertas decisiones atinentes al propio plan de vida, el **derecho a ver protegidas ciertas manifestaciones de integridad física y moral, el derecho al honor o reputación, el derecho a no ser presentado bajo una falsa apariencia, el derecho a impedir la divulgación de ciertos hechos o la publicación no autorizada de cierto tipo de fotografías,** la protección contra el espionaje, la protección contra el uso abusivo de las comunicaciones privadas, o la protección contra la divulgación de informaciones comunicadas o recibidas confidencialmente por un particular[22].

26. De esa manera es que se ha determinado que la propia imagen de las personas es un dato personal que debe ser protegido por los sujetos obligados. Por tanto, lo procedente a continuación, es desarrollar el tema, considerando a la propia imagen no solo como un dato personal, sino como un derecho fundamental, no sin antes y atendiendo a la transversalidad de los derechos humanos, analizar brevemente el derecho al honor y a la dignidad.

B) Derecho al honor y a la dignidad

27. En el marco del derecho nacional, estas prerrogativas se encuentran previstas de manera indirecta en los artículos 16 y 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así, el primer párrafo del artículo 16 del mismo instrumento normativo señala que nadie puede

[21] **Registro digital:** 165823, **Instancia:** Primera Sala, **Novena Época, Materia(s):** Constitucional, **Tesis:** 1a. CCXIV/2009, **Fuente:** Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXX, Diciembre de 2009, página 277, **Tipo:** Aislada
[22] Ídem

ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Por su parte, el artículo 25 constitucional establece como uno de los fines del desarrollo nacional a cargo del Estado, garantizar el pleno ejercicio de la dignidad de las personas.

28. La Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 11, establece que toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad, y que nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación. En similares términos se encuentra prevista en los artículos 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, V de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

29. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció en el "Caso Mémoli vs. Argentina" que: "La protección a la honra establecida en el artículo 11 de la Convención, como se sabe, prohíbe toda injerencia arbitraria o abusiva en la vida privada de las personas o ataques ilegales a su honra o reputación. Ello torna legítimo que quien se considere afectado en su honor recurra a los medios judiciales que el Estado haya dispuesto. En tanto derecho humano protegido por la Convención, se aplica análogo deber de garantía por parte del Estado, por lo que éste se encuentra obligado a asegurar que el derecho a la honra pueda ser protegido a plenitud poniendo a disposición de las personas los medios apropiados para ese efecto. Dentro de esta protección a la honra, en general, merece consideración el denominado "honor objetivo", que es, en esencia, el valor que los demás le asignan a la persona en cuestión en tanto se afecte la buena reputación o la buena fama de que goza en el entorno social en el que se desenvuelve.".[23]

30. En el mismo caso, el Tribunal Interamericano indicó que: "(…) el artículo 11.3 de la Convención impone a los Estados el deber de brindar la protección de la ley contra aquellas injerencias. El Estado se encuentra obligado a garantizar a las personas que se sientan afectas en su derecho al honor, los medios judiciales apropiados para que se establezcan las responsabilidades y sanciones correspondientes. De no hacerlo, el Estado podría incurrir en responsabilidad internacional. En consecuencia, el Estado tiene la obligación de garantizar el derecho a la honra y la reputación mediante acciones positivas, lo cual puede implicar, en ciertos casos, la adopción de medidas dirigidas a asegurar dicho derecho protegiéndolo de las interferencias de las autoridades públicas, así como también de las personas o instituciones privadas, incluyendo los medios de comunicación".[24]

31. Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha emitido una definición del honor de la manera siguiente: "(…) definir al honor como el concepto que la persona tiene de sí misma o que los demás se han formado de ella, en virtud de su proceder o de la expresión de su calidad ética y social. Todo individuo, al vivir en sociedad, tiene el derecho de ser respetado y considerado y, correlativamente, tiene la obligación de respetar a aquellos que lo rodean. En el campo jurídico esta necesidad se traduce en un derecho que involucra la facultad que tiene cada individuo de pedir que se le trate en forma decorosa y la obligación de los demás de responder a este tratamiento. Por lo general, existen dos formas de sentir y entender el honor: a) en el aspecto subjetivo o ético, el honor se basa en un sentimiento íntimo que se exterioriza por la afirmación que la persona hace de su propia dignidad; y b) en el aspecto objetivo, externo o social, como la estimación interpersonal que la persona tiene por sus cualidades morales y profesionales dentro de la comunidad. En el aspecto subjetivo, el honor es lesionado por todo aquello que lastima el sentimiento de la propia dignidad. En el aspecto objetivo, el honor es lesionado por todo aquello que afecta a la reputación que la persona merece, es decir, el derecho a que otros no condicionen negativamente la opinión que los demás hayan de formarse

[23] Voto concurrente de Diego García-Sayán en el "Caso Memoli vs. Argentina", Párr. 11
[24] "Caso Mémoli vs. Argentina", sentencia de 22 de agosto de 2013, Párr. 125.

de nosotros”.[25]

32. De igual forma, la misma Suprema Corte, ha sostenido lo siguiente: “(…) por daño moral debe entenderse la alteración profunda que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspectos físicos, o bien, en la consideración que de sí misma tienen los demás, producida por un hecho ilícito.[26]

33. De ahí que, en el sistema jurídico mexicano, los conceptos de honor y reputación se relacionan fundamentalmente con la dignidad, buena fama, prestigio, concepto público y buen nombre.[27] En definitiva, se tiende a la protección de las esferas individual y colectiva en relación con el valor intrínseco de la persona.

34. Si acorde a las características que conforman a los derechos humanos, éstos no recaen sobre cosas materiales, sino que otorgan acción para lograr que el Estado respete los derechos garantizados, y se consideran esenciales e inherentes al ser humano y derivados de su propia naturaleza, resulta lógico que los atributos de la personalidad se enlacen directamente con tales derechos, pues los mencionados atributos tienen una coincidencia con las libertades protegidas por los derechos del hombre como son los concernientes al honor, a la intimidad y a la propia imagen que constituyen derechos subjetivos del ser humano, en tanto que son inseparables de su titular, quien nace con ellos, y el Estado debe reconocerlos. Como no recaen sobre bienes materiales, sino sobre la personalidad de los individuos, son generales porque corresponden a todos los seres humanos, y no pueden considerarse renunciables, transmisibles o prescriptibles, porque son inherentes a la persona misma, es decir, son intrínsecos al sujeto quien no puede vivir sin ellos.

35. Ahora, del contenido expreso del artículo 1° constitucional se advierte que nuestro país actualmente adopta una protección amplia de los derechos humanos, mediante el reconocimiento claro del principio *pro personae*, como rector de la interpretación y aplicación de las normas jurídicas, en aquellas que favorezcan y brinden mayor protección a las personas, aunado a que también precisa de manera clara la obligación de observar los tratados internacionales firmados por el Estado Mexicano al momento de aplicar e interpretar las normas jurídicas en las que se vea involucrado este tipo de derechos, como son los señalados atributos de la personalidad conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y en casos en los que se involucra la posible afectación por daño moral de un atributo de la personalidad -en su vertiente del derecho al honor- debe aplicarse la tutela y protección consagrada en los principios reconocidos al efecto en nuestra Carta Magna, con independencia de que no exista una referencia expresa en el texto constitucional hacia la salvaguarda concreta del citado atributo, pues la obligación de protección deriva de disposiciones contenidas en dos tipos de ordenamientos superiores -Constitución y tratados internacionales- con los que cuenta el Estado Mexicano.

C) Derecho a la propia imagen.

36. Respecto al presente tópico, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el derecho a la intimidad es el derecho del individuo a no ser conocido por otros en ciertos aspectos de su vida y, por ende, el poder de decisión sobre la publicidad o información de datos relativos a su persona, familia, pensamientos o sentimientos, mientras que el derecho a la propia imagen, debe ser considerado como aquel derecho de decidir, en forma libre, sobre la manera en que elige mostrarse frente a los demás, por consiguiente, al constituir

---

[25] **Registro digital:** 2005523, **Instancia:** Primera Sala, **Décima Época, Materia(s):** Constitucional, **Tesis:** 1a./J. 118/2013 (10a.), **Fuente:** Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I, página 470, **Tipo:** Jurisprudencia

[26] **Registro digital:** 160425, **Instancia:** Tribunales Colegiados de Circuito, **Décima Época, Materia(s):** Civil **Tesis:** I.3o.C. J/71 (9a.), **Fuente:** Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro IV, Enero de 2012, Tomo 5, página 4036, **Tipo:** Jurisprudencia

[27] **Registro digital:** 2004895, **Instancia:** Tribunales Colegiados de Circuito, **Décima Época, Materia(s):** Común, **Tesis:** XVIII.4o.7 K (10a.), **Fuente:** Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXVI, Noviembre de 2013, Tomo 2, página 1310, **Tipo:** Aislada

derechos inherentes a la persona, fuera de la injerencia de los demás, se configuran como derechos de defensa y garantía esencial para la condición humana, ya que pueden reclamarse tanto en defensa de la intimidad violada o amenazada, como exigir del Estado que prevenga la existencia de eventuales intromisiones que los lesionen por lo que, si bien no son absolutos, sólo por ley podrá justificarse su intromisión, siempre que medie un interés superior.[28]

37. Por su parte, la Segunda Sala del más Alto Tribunal del país, precisó que el derecho a la imagen debe entenderse como parte del derecho a la identidad, y como un derecho personalísimo que tiene todo individuo de decidir cómo se muestra a los demás, esto es, la potestad de disponer en el ámbito de su propia autoridad y en forma libre sobre su propia imagen.[29]

38. En la doctrina se conceptualiza al derecho a la propia imagen como “La facultad que a cada persona corresponde, o debe corresponder, para prohibir o autorizar que su figura o imagen sea reproducida, utilizada o exhibida, con fines lucrativos o sin ellos.”[30] Para Novoa Monreal, este derecho es considerado como: “la posibilidad de su titular de manifestar su rechazo expreso a que su imagen sea conservada por otro”.[31]

39. Entonces, el derecho a la imagen es la facultad que tiene todo individuo a permitir o autorizar su reproducción, su publicación, así como a impedir a un tercero dicha reproducción o publicación. Este derecho, según Quintana está ligado a los derechos de la personalidad.[32] El derecho a la propia imagen, de acuerdo a la doctrina civil, es estudiado como una manifestación del derecho de la personalidad, los derechos de la personalidad se clasifican como: 1. Derecho a la vida y a la integridad física. 2. Derecho a la libertad (libertades públicas). 3. Derecho al honor y a la reserva. El derecho a la imagen constituye la principal manifestación del derecho a la reserva. 4. Derecho a la identidad personal. 5. Derecho moral de autor.[33]

40. El derecho a la propia imagen, como derecho subjetivo, tiene dos vertientes, una positiva, que es la facultad personalísima de captar, imprimir, difundir, publicar o distribuir nuestra imagen; la otra vertiente es la facultad para impedir la obtención, reproducción, difusión y distribución de su imagen por un tercero, si ella no ha otorgado su consentimiento para tal efecto.[34]

41. Así, la dignidad humana tutela el derecho a ser reconocido y a vivir en y con la dignidad de la persona humana, y del cual se desprenden todos los demás derechos, necesarios para que los individuos desarrollen integralmente su personalidad, dentro de los que se encuentran, entre otros, los relativos a: la vida, la integridad física y psíquica, al honor, a la privacidad, al nombre, a **la propia imagen**, al libre desarrollo de la personalidad, al estado civil y el propio derecho a la dignidad personal.

42. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al resolver el caso Fontevecchia y D'Amico vs. Argentina (Fondo, Reparaciones y Costas), sentencia de 29 de noviembre de 2011, párrafo 67, sostuvo que aunque el derecho a la propia imagen no se encuentra expresamente enunciado en el artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, las imágenes o fotografías personales están incluidas dentro del ámbito de protección de la vida privada, y que la **fotografía** es una forma de expresión que recae en el ámbito de protección del artículo 13 de la propia convención.

---

[28] **Registro digital:** 165821, **Instancia:** Pleno, **Novena Época, Materia(s):** Civil, Constitucional, **Tesis:** P.LXVII/2009, **Fuente:** Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXX, Diciembre de 2009, página 7, **Tipo:** Aislada

[29] **Registro digital:** 2011892, **Instancia:** Segunda Sala, **Décima Época, Materia(s):** Constitucional, **Tesis:** 2a. XXV/2016 (10a.), **Fuente:** Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 31, Junio de 2016, Tomo II, página 1206, **Tipo:** Aislada

[30] Guillermo Cabanellas (Carbanellas, 1996: 103)

[31] Novoa Monreal, 1997:71

[32] Quintana, 1949: 140

[33] Según De Cupis (1950: 27-30)

[34] Rovira Sueiro, María E., “El Derecho a la Propia Imagen (especialidades de la responsabilidad civil en este ámbito), Granada, Biblioteca Comares de Ciencias Jurídicas, 2000, p. 33.

43. Lo anterior ha sido retomado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y sus Organismos, sosteniendo que el derecho a la propia imagen es personalísimo, y únicamente faculta a su titular a decidir en forma libre, sobre la manera en que elige mostrarse frente a los demás y, por consiguiente, se configura, junto con otros también personalísimos (a la intimidad y a la identidad personal y sexual), como un derecho de defensa y garantía esencial para la condición humana[35]. Recientemente, al resolver el Amparo Directo en Revisión 4083/2020, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, interpretó que el derecho a la propia imagen es un derecho fundamental, en virtud de que deriva de la dignidad humana, principio que a su vez está implícitamente contenido en el artículo 1º constitucional. Asimismo, que la imagen que uno conserva para mostrarse a los demás, se encuentra dentro del derecho a la intimidad, constituyéndose como derechos personalísimos, pertenecientes al ámbito propio del ser humano, fuera de la injerencia de personas extrañas, de tal manera que "[e]l individuo tiene el derecho de decidir, en forma libre, sobre su propia imagen".

44. En esa misma resolución, la Suprema Corte interpretó que la regulación entre los derechos del autor y los del titular de la imagen están reguladas por la Ley Federal del Derecho de Autor, en esta legislación, concretamente en el artículo 87, se protege el derecho a la propia imagen en aquellos casos en los que la utilización de una imagen se hace sin el consentimiento de su titular, al tiempo que contempla la posibilidad de recibir una indemnización específica por la vulneración a ese derecho (artículo 216 Bis) a través una acción judicial de reparación del daño (artículo 213), además de prever otros mecanismos para la defensa y protección de la propia imagen.

45. Finalmente, se hace necesario advertir que la Primera Sala del más Alto Tribunal del país, sostuvo un criterio mediante el cual hace referencia que cuando el acto de molestia constituye la toma de fotografías a personas que no han sido puestas a disposición del Ministerio Público en calidad de detenidas o presuntas responsables, este acto menoscaba o restringe derechos de la persona, al hacer uso de su imagen, aunado a que **la obtención de fotografías puede resultar violatoria de los derechos a la honra y a la dignidad contenidos en los artículos 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos**, si el Estado incumple con sus obligaciones relativas a la protección de datos personales, las cuales consisten en: a) solicitar o registrar información que contenga datos personales sólo en los casos previstos por la ley; y, b) tratar confidencialmente tales datos, lo que implica utilizarlos o revelarlos sólo con el consentimiento de la persona a quien correspondan. Así, el hecho de que la autoridad obtenga fotografías de cualquier persona, sin importar su situación jurídica, efectivamente representa un menoscabo y un deterioro en sus derechos, de naturaleza continuada, pues mientras el resultado del acto (las fotografías) no se elimine, el acto de molestia continúa.[36]

46. Derivado de lo anterior, con apego a las facultades que esta Comisión de Derechos Humanos tiene, una vez que el [...], el periódico local "Página 24", hizo pública el comunicado que hace […], mediante el cual denuncian una campaña de odio en contra de los movimientos feministas, ya que se difundió un video en el que se observa […], por lo que afirmaron que ese video era exclusivo de las instituciones de seguridad pública, y al revelarlos, incitaban al odio en su contra, se inició queja oficiosa.

47. Por otro lado, **VD** acudió ante este Organismo a presentar queja por esos mismos hechos y, refirió que, derivado de la publicación del citado video, recibió mensajes de odio y amenazas.

48. Al solicitar el informe de autoridad a quien para esa fecha [...] le correspondía el control de la red estatal de videovigilancia por conducto del Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo del Estado de Zacatecas, Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública, **MAESTRO**

---

[35] **Registro digital:** 2013415, **Instancia:** Tribunales Colegiados de Circuito, **Décima Época, Materia(s):** Constitucional, Administrativa, **Tesis:** I.7o.A.144 A (10a.), **Fuente:** Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 38, Enero de 2017, Tomo IV, página 2513, **Tipo:** Aislada.

[36] **Registro digital:** 166037, **Instancia:** Primera Sala, **Novena Época, Materia(s):** Penal, **Tesis:** 1a. CLXXXVIII/2009, **Fuente:** Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Noviembre de 2009, página 401, **Tipo:** Aislada

AR1, negó los hechos e hizo referencia al deber de la federación, estados y municipios, respecto a la seguridad pública, a efectos de prevenir los delitos. Afirmando que fue una acción de la policía municipal de Zacatecas, quienes conocieron la identidad y/o el género de las personas que participaron en la protesta. Asimismo, **refirió desconocer cuál fue la intención de la persona que filtró el video**, negando categóricamente, que por conducto de la dependencia que representa o el personal adscrito a la misma, haya filtrado la información y/o los videos.

49. Al referido informe de autoridad, adjuntó un diverso informe, suscrito por el **I.S.C. AR2**, Director del Centro de Coordinación Integral, Control, Comando y Comunicaciones, del cual se desprende que el [...], a las […] horas, la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Zacatecas, reportó al C-5 que en su central de radio, se recibió una llamada telefónica, mediante la cual informaban que personas de sexo femenino se encontraban realizando pintas sobre las fachadas de edificios del centro histórico, dando parte al sistema de videovigilancia, quienes validaron la información, pues tuvieron a la vista a personas sobre el callejón de Las Campanas, quienes realizaban algunas acciones en las paredes, por lo cual hicieron del conocimiento a la Dirección de Seguridad Pública Municipal y a las demás corporaciones que se alojan en el C-5, de ahí que minutos más tarde, las personas que realizaban la protesta fueron detenidas y puestas a disposición del Juez Comunitario.

50. Atendiendo al marco normativo que regula la videovigilancia en el Estado, este Organismo tiene por cierto que las grabaciones que circularon en algunos medios de comunicación, con las cuales la imagen de **VD** fue captada, fueron obtenidas a través de las cámaras de videovigilancia del cual el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, tenía el control, por conducto del entonces Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo del Estado de Zacatecas, pues así se pudo acreditar mediante una inspección ocular realizada por personal adscrito a esta Comisión de Derechos Humanos, en los monitores, concretamente aquel que enfoca las cámaras que se encuentran ubicadas en el callejón de Las Campanas, de lo cual se dejó evidencia fotográfica en el expediente de queja.

51. Asimismo, atendiendo a las funciones, facultades y obligaciones legales que tenían el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública y el Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo del Estado de Zacatecas, respecto de la protección de datos personales y el respeto a los derechos humanos, como es el derecho a la propia imagen, se encontraban obligados a proteger los datos personales de **VD**, por lo que no es factible que en sus respectivos informes hagan el señalamiento de que ellos no lo hicieron, sino que estaban obligados a que ninguna de las personas que tuvieron acceso a los monitores de las cámaras lo hiciera.

52. Lo anterior es así, pues de inicio, la Ley de Videovigilancia para el Estado de Zacatecas, no solo establece como objeto la regulación de la ubicación, instalación, utilización y operación de videocámaras y sistemas de videovigilancia, sino el posterior tratamiento. Por tanto, el uso de la información obtenida de las cámaras de videovigilancia que eran controladas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública a través del C-5, no se puede obtener, clasificar, custodiarse o utilizarse como medio de prueba, cuando contravenga la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, es decir, cuando se violente la vida privada de las personas.

53. Por otro lado, la información obtenida debía registrarse, clasificarse y tratarse de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas, es decir, protegiendo los datos personales que de ella se desprendiera, y que pudieran poner en riesgo la vida, seguridad o salud, en este caso de **VD**, ya que del video que circuló en algunos medios de comunicación, se advierten datos personales de ella, con los cuales fue susceptible de ser identificada e identificable, pues su identidad pudo determinarse directa o indirectamente a través de la información que circuló junto con el video, al referirse a ella como miembro de un colectivo feminista de la entidad.

54. Entonces, exhibir a **VD** de la manera en que se hizo, a través de los videos obtenidos del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública, es claro que se puso en riesgo su integridad personal al ser identificada, tan es así que recibió de forma personal y directa, amenazas. Pues si bien es cierto, se cuenta con la facultad del estado para instalar, utilizar y operar videocámaras y sistemas de videovigilancia, también lo es que esa facultad cuenta con límites, entre ellos la protección de los datos personales de quienes pudieran considerarse afectadas o afectados, así como garantizarles los derechos fundamentales como la privacidad, el honor y la propia imagen, lo cual no aconteció, pues no existió un eficaz control sobre la información obtenida el [...], a las […] horas, aproximadamente.

55. Este Organismo considera como una falta grave a la seguridad jurídica de las personas, particularmente la de **VD**, la falta de control de la información y datos generados a través de las videocámaras y sistemas de videovigilancia que se encontraban a cargo del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, pues incluso la propia autoridad responsable, admite que el video que circuló en medios de comunicación, es copia fiel de sus archivos; no obstante, no tiene la capacidad de identificar quien pudo realizar dicha copia o el mecanismo por el que dicho video llegó a medios de comunicación.

56. Lo anterior se considera así, en atención a que el artículo 22 de la Ley de Videovigilancia para el Estado de Zacatecas vigente en el momento de los hechos, establece que la información obtenida por los sistemas de videovigilancia, conforme a los lineamientos de esa Ley, debe registrarse, clasificarse y tratarse de conformidad con lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados, ambas del Estado de Zacatecas, lo cual, se insiste, en el presente caso no ocurrió.

57. Por lo cual este Organismo considera que, el hecho de que se haya permitido que la información obtenida a través de las videocámaras y sistemas de videovigilancia, se hiciera pública y circulara por diversos medios de comunicación y redes sociales, violenta el derecho a la propia imagen de **VD**, como parte de su derecho a la identidad, pues solo ella tiene el derecho de decidir cómo se muestra ante los demás, fuera de la injerencia de personas extrañas.

58. De ahí que al haberse expuesto la imagen de **VD**, como integrante del colectivo feminista "[...]", es claro que generó que sufriera una serie de amenazas, ya que fue indebidamente expuesta a través del video que salió de las instalaciones del Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo del Estado de Zacatecas C-5, que era controlado por Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, así como sus posteriores réplicas, en diversos medios de comunicación, con lo cual se puso en riesgo su integridad personal, ya que al ser identificada, sufrió de forma personal y directa, amenazas.

59. Por tanto, atendiendo a las obligaciones que toda autoridad y servidor público tiene de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, se hace necesario remitirnos a dos de esas obligaciones. Respecto a la **obligación de respetar** constituye la obligación más inmediata y básica de los derechos humanos, en tanto implica **no interferir con poner o no poner el peligro los derechos**. Se trata de una obligación tendente a mantener el goce del derecho, cuyo cumplimiento es inmediatamente exigible, cualquiera que sea la naturaleza del derecho. Esta obligación del Estado se cumple mediante las abstenciones, pero se violenta a través de las acciones[37].

60. Por otra parte, la **obligación de garantizar** tiene el objetivo de mantener el disfrute del derecho y de mejorarlo.[38] Al tratarse de asegurar la realización de los derechos humanos para todas las personas, es necesario planear, establecer metas y crear mecanismos de control, esta

37 Serrano Sandra y Vázquez Daniel, *Los derechos en acción. Obligaciones y, principios de derechos humanos.* México, Distrito Federal, FLACSO-México.2013, p.61-62
38 Serrano, p.71.

obligación tiene por objeto materializar el derecho y asegurar la posibilidad de su disfrute por ello guarda en el centro el principio de efectividad, por lo que, el camino que ha de transitarse para lograrlo dependerá del derecho en cuestión, del punto de inicio, de los recursos del Estado, y del tiempo de que se disponga[39].

61. Al igual que la obligación de protección, la obligación de garantizar implica la creación de la maquinaria institucional para la adopción de medidas tendientes a la plena efectividad de los derechos humanos[40] y, por tanto, es una tarea progresiva, de realización gradual. Su principal objetivo es hacer efectivo un derecho.

62. Atendiendo a lo precedente, tanto el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, como quien de él dependía en el tema de videovigilancia en materia de seguridad pública, Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo del Estado de Zacatecas (C-5), desatendieron las obligaciones que tenían de respetar y de garantizar los derechos humanos de **VD**, aun y cuando tenían un marco normativo cuyo espíritu en su creación fue justamente garantizar la confidencialidad, integridad, seguridad y funcionalidad de la información generada y en cuyo instrumento normativo se fijaron expresamente las bases para la protección de los datos personales.

63. Respecto a la primera de las omisiones, debemos recordar que la Ley de Videovigilancia para el Estado de Zacatecas, expresamente dispone que la información obtenida a través de las videocámaras y sistemas de videovigilancia, deberá ser tratada con base en el respeto de los derechos humanos, como aquellos que resguardan la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados, ambas del Estado de Zacatecas, es decir, con estricto respeto a los datos personales, como es el caso de la propia imagen y, en este sentido, únicamente le corresponde a **VD** determinar libremente la manera en que elige mostrarse frente a los demás, vista esta como la vertiente positiva de este derecho subjetivo. Y, respecto de la vertiente negativa de impedir la obtención, reproducción, difusión y distribución de su imagen por un tercero, en este caso de las instituciones encargadas del control de la red estatal de videovigilancia, si ella no otorgó su consentimiento para la obtención de su imagen, con lo cual se puso en riesgo o peligro sus derechos. Esto último es así, pues del expediente de queja no se advierte documento alguno mediante el cual **VD** hubiera otorgado su consentimiento para que su imagen se difundiera de la forma en la que se hizo.

64. Por cuanto hace a la obligación de garantizar, ésta se incumplió por parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública y del Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo del Estado de Zacatecas (C-5), pues de ellos dependía que **VD** continuara disfrutando de su derecho a la imagen, en ambas vertientes, pero principalmente en la primera, en cómo ella decidía mostrarse a los demás, desatendiendo que la Ley que rige sus funciones y facultades, expresamente dispone también sus límites y obligaciones, entre ellas, que el manejo de la información captada a través de la red estatal de videovigilancia se encuentra sustentado en el respeto de los derechos humanos, entre ellos los contemplados en las leyes de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados, ambas del Estado de Zacatecas, es decir, los datos personales, entre los cuales se encuentra como tal el derecho a la propia imagen, mismo que ha sido considerado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como un derecho humano.

65. Incluso, en el presente Instrumento se hace referencia de manera análoga a uno de los criterios establecidos por la Primera Sala del más Alto Tribunal del país, en el que sostuvo que la obtención de fotografías, en el presente caso se trató de videograbaciones, puede resultar violatoria de los derechos a la honra y a la dignidad contenidos en los artículos 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 11 de la Convención Americana sobre Derechos

39 Serranp, p.72
40 Serrano, p.73

Humanos, si el Estado incumple con sus obligaciones relativas a la protección de datos personales, pues en la especie los datos personales de **VD** obtenidos de la red estatal de videovigilancia, fueron utilizados y revelados públicamente sin su consentimiento, lo que representa un menoscabo y un deterioro en sus derechos, hasta en tanto el referido video no sea eliminado del ciberespacio, pues cada vez que se tiene acceso a él se actualiza la situación jurídica que aquí se reprocha, es decir, la vulneración a sus derechos humanos a la honra, a la dignidad y a la propia imagen y, con ellos, a la igualdad y no discriminación, por razón de género.

66. Entonces, de conformidad con el artículo 1° constitucional y el parámetro de regularidad constitucional, es obligación de todas las autoridades actuar con la debida diligencia y adquiere una connotación especial en casos de violencia contra las mujeres, pues el derecho de la mujer a una vida libre de discriminación y de violencia se traduce en la obligación de toda autoridad de actuar con perspectiva de género, lo cual pretende combatir argumentos estereotipados e indiferentes para el pleno y efectivo ejercicio del derecho a la igualdad.

67. Por ello, debemos advertir que la discriminación es una práctica cotidiana que consiste en dar un trato desfavorable o de desprecio inmerecido a determinada persona o grupo. El origen étnico o nacional, el sexo, la edad, la discapacidad, la condición social o económica, la condición de salud, el embarazo, la lengua, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil y otras diferencias pueden ser motivo de distinción, exclusión o restricción de derechos. Los efectos de la discriminación en la vida de las personas son negativos y tienen que ver con la pérdida de derechos y la desigualdad para acceder a ellos.

68. En el caso que nos ocupa, la quejosa **VD** como integrante del colectivo “[...]” fue señalada con particular ahínco por su sexo, así como por sus opiniones que las ligan al movimiento feminista en el estado de Zacatecas, y se calificó de negativa su intervención social, por lo que la difusión de su imagen se tornó motor de amenazas y comentarios degradantes en su contra por parte de la sociedad en general.

69. El señalamiento y distinción arbitraria e injusta a la que fue expuesta **VD** como integrante del colectivo “[...]”, como consecuencia de una falta de pericia y de total desapego a las obligaciones legales que tenía el Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, **MAESTRO AR1**, por sí y por conducto del titular del Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo del Estado de Zacatecas, **I.S.C. AR2**, para garantizar el respeto de los derechos humanos, como el honor, la dignidad, la intimidad, la propia imagen, vista ésta como un derecho humano y como un dato personal, pues su negligencia de resguardar la información obtenida de la red estatal de videovigilancia, se convierte en una clara omisión a la obligación de respetar y de garantizar los derechos humanos de la quejosa, las cuales emanan del tercer párrafo del artículo 1° Constitucional[41], con relación al derecho a la no discriminación.

70. Por otro lado, es de advertirse una omisión más en la que incurrió el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, pues tenía la facultad y obligación de investigar quién o quiénes fueron las personas que dejaron de cumplir con las obligaciones que les encomienda la Ley de Videovigilancia para el Estado de Zacatecas, ya que no basta que, mediante su informe de autoridad, por un lado, afirmara que el video de marras efectivamente fue obtenido desde los monitores del entonces Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo del Estado y por otro lado, afirmara desconocer la intención de la persona que filtró el referido video, negando además, que del órgano que representa o del personal adscrito al mismo, se haya filtrado la información consistente en la captura del video, pues tenía el deber legal de investigar qué servidor público se encontraba encargado de la custodia de las grabaciones, así como si este dio acceso a una tercera persona sin derecho a ello, o cuál servidor público participó en la difusión de grabaciones obtenidas al amparo de la referida legislación, además

41 Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen **la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos** de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley

de investigar a su o sus superiores jerárquicos[42].

71. Entonces, soslayó que fue de las instalaciones que estaban a su cargo, que se obtuvo la información captada a través de videocámaras y sistemas de videovigilancia de las que él tenía el control por conducto del Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo del Estado de Zacatecas, entre ellas, la cámara ubicada en el callejón de Las Campanas, de las cuales se obtuvo el video el día [...], permitiendo que medios de comunicación lo obtuvieran y replicaran desde sus plataformas digitales, con el solo fin de generar discursos de odio en contra de los colectivos feministas que se oponen, a través de protestas, a los diversos tipos y modalidades de la violencia contra las mujeres.

72. Por lo anterior, la falta de un efectivo manejo y control de la red estatal de videovigilancia y de la información que de ella se obtiene impidió que **VD**, integrante del colectivo "[...]" pudiera hacer efectivo su derecho a la no discriminación. Por el contrario, se convirtió en protagonista de mensajes donde se le atacó, se le calificó con lenguaje peyorativo, por ser mujer que realizaba protestas en contra de la violencia contra las mujeres. Entonces, estos mensajes alentaron la intolerancia y el odio hacia su persona como integrante de un movimiento social que históricamente ha sido criminalizado, impidiendo con ello, la promoción de relaciones igualitarias entre hombres y mujeres.

73. De esta forma, los mensajes que se construyeron alrededor del multicitado video, alentaron las causas de opresión de género como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas basadas en el género y si bien, los mensajes no son responsabilidad directa de las autoridades estatales, esta situación se pudo haber prevenido o evitado si el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública hubiera realizado las siguientes acciones que le faculta la Ley:

> I. Garantizando y velando por la integridad de las y los habitantes, aplicando correctamente la Ley de Videovigilancia para el Estado de Zacatecas, con base en el respeto a los derechos fundamentales de las personas en las fases de grabación y uso de las imágenes y sonidos obtenidos conjunta o separadamente por el sistema de videovigilancia.[43]
> II. Prevenir, inhibir y combatir conductas ilícitas, así como a garantizar el orden y la tranquilidad de las y los habitantes.[44]

74. Si se hubiera apegado a su obligación de respetar y proteger los derechos humanos, tales como el honor, la dignidad, la intimidad, la propia imagen, analizada ésta como un derecho humano y como datos personales, tal cual lo exigen la Ley de Videovigilancia, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados, todas del Estado de Zacatecas, entonces se hubiera prevenido las agresiones verbales y los riesgos en los que se expuso a **VD**, ante la difusión del referido video. Incluso, una vez expuesto el video públicamente, pudo haber investigado y sancionado a quién o quiénes participaron en el acceso de terceras personas a las grabaciones y quién o quiénes participaron en su difusión.

75. El respeto al trabajo de los grupos o colectivos feministas debe promoverse desde las entidades de Gobierno para que, en conjunto con los sectores sociales, se puedan construir espacios mucho más equitativos que aspiren a la igualdad sustantiva entre las actividades políticas de hombres y mujeres en el espacio público. Ahora bien, este Organismo no soslaya que, posiblemente la materialización de la protesta, pudiera consistir en una infracción comunitaria, de las expuestas en la Ley de Justicia Comunitaria del Estado de Zacatecas, lo cual, según lo informado por el Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública y confirmado por la quejosa a través de su escrito de queja, fue atendido por la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Zacatecas. Sin embargo, en el supuesto de que se actualizara alguna infracción a la Ley de Justicia Comunitaria del Estado de Zacatecas, de ninguna manera

---

[42] Ley de Videovigilancia para el Estado de Zacatecas, vigente el día de los hechos, artículo 37
[43] Ley de Videovigilancia para el Estado de Zacatecas, vigente el día de los hechos, artículo 4
[44] Ídem, artículo 7

le facultaba a ningún servidor público de los adscritos al Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública y del Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo del Estado de Zacatecas, entre ellos sus titulares, a dar acceso a las grabaciones a un tercero, así como a participar en la difusión de las grabaciones obtenidas de la red estatal de videovigilancia, con lo cual se permitió la difusión pública de la información obtenida como video, a medios de comunicación y diferentes redes sociales.

76. Dicho lo anterior y luego de hacer un estudio holístico de la evidencia recabada, los hechos probados y considerando los estándares señalados en el apartado anterior, esta Comisión concluye que en el presente caso se acreditaron violaciones a los derechos humanos de **VD** tales como el derecho a la legalidad y seguridad jurídica, en relación con el derecho al honor y a la dignidad, así como el derecho a la imagen, a la igualdad y no discriminación, cometidas en su contra como integrante de un colectivo feminista y que el [...], se encontraba realizando una protesta en contra de la violencia contra las mujeres. Pues las acciones emprendidas desde el interior del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, impidió garantizar el principio de legalidad que tiene por objeto evitar que las personas pueden ser molestadas sino es en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, situación que para el caso concreto no existió. Asimismo, el derecho personalísimo a la propia imagen del cual, únicamente la titular puede decidir cómo quiere representarse ante los demás. Luego, aun y cuando fue notificado de estos hechos el día 12 de febrero de 2020, no emprendió acción alguna para investigar y sancionar a quién o quiénes haya sustraído y difundido la información extraída de ahí, del Órgano Desconcentrado que él representa, incluso su opacidad se actualiza a más de un año, 8 meses de que los hechos ocurrieron, pues no ha emprendido acción alguna para evitar que el video continúe circulando en medios de comunicación y redes sociales, aun cuando su contenido emergió de ahí.

77. Entonces, la hostilidad y violencia en agravio de **VD** como integrante del colectivo “[...]” debe ser frenada mediante acciones estatales como parte de su obligación de garantía o de lo contrario, se potencia la violencia institucional contra las mujeres por parte de los organismos, órganos, autoridades o entidades del gobierno estatal. Por tal motivo, se deberán generar estrategias, al interior del Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia, ahora dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública, a fin de tener un control efectivo y posterior tratamiento de la información obtenida a través de la red estatal de videovigilancia, tal como lo establece la Ley de Videovigilancia para el Estado de Zacatecas.

78. Adicionalmente a lo expuesto, una vez que se filtró el material, el titular del Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, **MAESTRO AR1**, a efecto de garantizar el debido cumplimiento de la Ley de Videovigilancia para el Estado de Zacatecas, tenía facultades para investigar y aplicar las sanciones que la propia ley establecía en el artículo 37, debiendo sancionar al servidor público que, encargado de la custodia de las grabaciones, dio acceso a éstas a un tercero sin derecho a ello, así como al que participó en la difusión de grabaciones obtenidas al amparo de la referida Ley; así como al servidor público que fuera el superior jerárquico de quienes estuvieron encargados del manejo del sistema de tratamiento de imágenes con o sin sonido, incluso al Prestador de Servicios de Seguridad Privada, que hubieran permitido la operación de los sistemas de videovigilancia en condiciones distintas a las establecidas en la autorización.

79. En ese mismo orden de ideas, el Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, **MAESTRO AR1**, debió haber emitido un extrañamiento a los medios de comunicación por la utilización del material ilegalmente obtenido de herramientas estatales, el cual lejos de garantizar la seguridad pública, fue utilizado para criminalizar la protesta en la que participaba **VD**, e incluso, exhortarlos para que bajaran de sus plataformas el referido video obtenido de forma ilegal desde el interior del Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo del Estado, del cual él era responsable, situación que no se cumplió.

80. Entonces, la autoridad responsable, Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de

Seguridad Pública, por conducto de su titular el **MAESTRO AR1** y del Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo del Estado de Zacatecas, dirigido por el **I.S.C. AR2**, con sus omisiones no solo permitieron la obtención y posterior filtración del video a medios de comunicación, sino que dicho material se difundiera públicamente estigmatizando a **VD**, por el hecho de pertenecer a un colectivo feminista que, el día [...], expresaron su descontento ante la violencia contra las mujeres que se sufre en esta entidad federativa, sin que hayan realizado acción alguna para impedir que la información obtenida a través de un video, continuara siendo difundido, revictimizando a la aquí quejosa, cada vez que éste material se vuelve a reproducir.

X. DE LAS VÍCTIMAS DIRECTAS

1. La Corte Interamericana ha definido qué se entiende por "víctima" en general y qué se entiende por "víctima" *stricto sensu* dentro de un proceso contencioso. La noción de "víctima" bajo derecho internacional refiere a la parte lesionada.

2. De conformidad con reglas generales de la Responsabilidad Internacional de los Estados, la parte lesionada es aquella "cuyo derecho individual ha sido denegado o dañado por el acto ilegal internacional o que ha sido de otra manera particularmente afectado por dicho acto". En el área de la protección internacional de derechos humanos, la parte lesionada es el individuo cuyos derechos han sido violados, es decir la parte cuyos derechos han sido conculcados generándosele un daño. A menudo también se le refiere como la "parte agraviada".

3. El Reglamento de la Corte Interamericana define el término "víctima" de la siguiente manera: "significa la persona cuyos derechos han sido violados de acuerdo a la sentencia proferida por la Corte". Es decir, "víctima" es aquella cuyos derechos ya han sido determinados por la Corte habiendo establecido violaciones en su detrimento.

4. Luego, la jurisprudencia de la Corte ha expandido *rationae personae*[45] el reconocimiento de la condición de "víctima" a personas que en su jurisprudencia inicial no eran consideradas como tales. Por ejemplo, en el caso Villagrán Morales y Otros la Corte reconoció la condición de víctimas con base a derecho propio, de los familiares de los menores asesinados. La Corte reconoció en ese sentido que los familiares de dichos menores torturados y asesinados también habían sufrido en sí mismas violaciones del artículo 5 de la Convención. En el caso Villagrán Morales y Otros, la Corte Interamericana falló de la siguiente manera: "La Comisión señaló, en sus alegatos finales escritos, que las circunstancias de la muerte de las víctimas, así como la falta de actuación del Estado, habían provocado en los familiares de las mismas "angustias y también considerable temor"[46]. "La Corte debe destacar entre las conductas de los agentes estatales que intervinieron en los hechos del caso y que produjeron un impacto sobre sus familiares, la correspondiente al tratamiento que se dio a los cuerpos de los jóvenes cuyos cadáveres aparecieron en los Bosques de San Nicolás, […]. Estas personas no sólo fueron víctimas de la violencia extrema correspondiente a su eliminación física, sino que, además, sus cuerpos fueron abandonados en un paraje deshabitado, quedaron expuestos a las inclemencias del tiempo y a la acción de los animales y hubieran podido permanecer así durante varios días, si no hubieran sido encontrados fortuitamente. En el presente caso, es evidente que el tratamiento que se dio a los restos de las víctimas, que eran sagrados para sus deudos, y en particular, para sus madres, constituyó para éstas un trato cruel e inhumano."[47]

5. En el caso Bámaca Velásquez[48], la noción ampliada de *rationae persone* fue aplicada a la viuda del desaparecido. En dicha decisión, el juez Cançado Trindade señaló con referencia a la expansión de la noción de "víctima" lo siguiente: "…Así, la Corte Interamericana ha establecido correctamente que, en circunstancias como las del presente caso Bámaca Velásquez, las

45 Por razón de la persona.
46 Villagrán Morales et al case, Series C: No 63., Sentencia del 19 de noviembre de1999, párr. 171.
47 Villagrán Morales, *Op. Cid*., párr. 174.
48 CtIADH, Caso Bámaca Velásquez, Series C No 70. Sentencia sobre Fondo, Sentencia de 25 de noviembre de 2000.

víctimas son tanto la persona desaparecida como sus familiares inmediatos.”[49]

6. En el marco legal nacional, la Ley General de Víctimas conceptualiza en su artículo 4, a las víctimas directas e indirectas, entre otras, de la siguiente manera:

> […] víctimas directas aquellas personas físicas que hayan sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional, o en general cualquiera puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte. Son víctimas indirectas los familiares o aquellas personas físicas a cargo de la víctima directa que tengan una relación inmediata con ella.

Mientras que, los párrafos segundo y tercero señalan:

> Son víctimas indirectas los familiares o aquellas personas físicas a cargo de la víctima directa que tengan una relación inmediata con ella. Para este efecto se consideran víctimas indirectas, entre otros, los siguientes: I. El cónyuge, la concubina o el concubinario; II. Las hijas e hijos de la Víctima; III. Los Padres de la Víctima, y IV. Los dependientes económicos de la Víctima.

7. En el caso particular, obran comparecencias en el expediente de queja que con base en los criterios anteriores acreditan la calidad de **víctima directa** a **VD**.

XI. REPARACIONES.

1. De conformidad con lo establecido en los artículos 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 51 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, al acreditarse violación a los derechos humanos de estudiantes mujeres de la Unidad Académica de Psicología, campus Zacatecas, de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas, la Recomendación formulada al respecto, debe incluir las medidas que procedan para lograr la efectiva restitución de las personas afectadas en sus derechos.

2. Así, en un respeto irrestricto del Estado de Derecho, las personas gozarán de la garantía de que en caso de ser objeto de violación a sus derechos humanos, podrán reclamar que el o los responsables de dicha vulneración sean sancionados, pues el Estado tiene la posición de garante de sus derechos y por lo tanto; según lo ha dispuesto la Suprema Corte de Justicia de la Nación, “Las víctimas de violación a los derechos humanos o sus familiares, tienen derecho a la reparación adecuada del daño sufrido. Lo cual debe concretarse a través de medidas individuales tendientes a restituir, indemnizar y rehabilitar a la víctima, así como de medidas de satisfacción de alcance general y garantías de no repetición, mediante los procedimientos previstos legalmente para esos efectos, lo cual no es una concesión graciosa, sino el cumplimiento de una obligación jurídica. Lo anterior deriva tanto del régimen previsto constitucionalmente como de los instrumentos internacionales ratificados por México y de los criterios de organismos internacionales, los cuales se manifiestan claramente en el sentido de que es un derecho efectivo de las personas agraviadas a nivel fundamental obtener una reparación proporcional a la gravedad de las violaciones y al daño sufrido.”[50]

3. Dicha reparación, de conformidad con los *Principios y Directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones*, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 2005, las violaciones de derechos humanos deben contemplar, de forma apropiada y

---

49 *Ídem,* Párrafo 38

[50] Tesis P/LXII/2010, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena Época, t XXXIII, enero de 2011, pág. 28

proporcional a la gravedad de ésta, una reparación plena y efectiva en las formas siguientes: restitución, rehabilitación, satisfacción, indemnización, deber de investigar y garantías de no repetición. En el caso en concreto y ante la pérdida fatal, no es posible solicitar la restitución de los derechos humanos conculcados. Las reparaciones se contemplan también en la Ley General de Víctimas, en sus artículos 1, último párrafo, 7, fracción I y II, y particularmente en el texto legal del artículo 26, que establece que "Las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera oportuna, plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva por el daño que han sufrido como consecuencia del delito o hecho victimizante que las ha afectado o de las violaciones de derechos humanos que han sufrido, comprendiendo medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y medidas de no repetición", además por lo previsto en el artículo 27 del mismo ordenamiento legal.

4. En el sistema regional, la Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 63.1 establece que:

> "*Cuando decida que hubo violación a un derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá, asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que se ha configurado la violación a estos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada".*

5. Por su parte, La CrIDH, ha establecido que *"Las reparaciones, como el término lo indica, consisten en las medidas que tienden a hacer desaparecer los efectos de las violaciones cometidas. Su naturaleza y su monto dependen del daño ocasionado en los planos tanto material como inmaterial"*[51].

6. Este doble alcance de la norma reparatoria, ha incidido cada vez con mayor frecuencia en el desarrollo de la jurisprudencia de la CrIDH, dando lugar a una arquitectura reparatoria que tendrá como objetivo, no sólo borrar las huellas que en la víctima produjo el actuar del Estado, sino también evitar que ese tipo de hechos se vuelvan a repetir.[52]

7. Por lo que hace a este derecho, el artículo 51 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, dispone que, al acreditarse una violación a los derechos humanos atribuible a un servidor público estatal, la Resolución formulada al respecto debe incluir las medidas que procedan para lograr la efectiva restitución de las personas afectadas en sus derechos.

Modalidades de la reparación del daño. La reparación del daño comprende diversas modalidades en las que se puede materializar:

A) De la indemnización.

1. La indemnización ha sido reconocida como una medida que tiende a compensar a las víctimas por afectaciones materiales sufridas con motivo de la falta que ha cometido el Estado en su perjuicio, entre ellos, el daño emergente, el lucro cesante y el daño moral sufrido por la agraviada[53]; lo que no puede implicar ni un empobrecimiento ni un enriquecimiento para la víctima o sus sucesores[54].

---

[51]Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Acevedo Jaramillo y otros Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de febrero de 2006. Serie C No. 144, Párr. 175.
[52]Rousset Siri, Andrés Javier (2011): *El Concepto de reparación integral en la Jurisprudencia Interamericana de Derechos humanos.* Revista Internacional de Derechos Humanos / ISSN 2250-5210 / 2011 Año I – N1 59 www.revistaidh.org
[53]Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Velázquez Rodríguez vs Honduras, Reparaciones y Costas, Sentencia 21 de junio de 1989, Serie C, No. 7, párr. 38.
[54]Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Tinoco Estrada y otros vs Bolivia, Fondo, reparación y costas. Sentencia 27 de noviembre de 2008 C, No. 211.

2. La indemnización debe concederse de forma apropiada y proporcional a la gravedad de la violación y a las circunstancias de cada caso, por todos los perjuicios económicamente evaluables que sean consecuencia de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos, tales como los siguientes: a) el daño físico o mental; b) la pérdida de oportunidades, en particular las de empleo, educación y prestaciones sociales; c) los daños materiales y la pérdida de ingresos, incluida el lucro cesante; d) los perjuicios morales; y e) los gastos de asistencia jurídica o de expertos, medicamentos y servicios médicos y servicios psicológicos y sociales[55].

3. En la presente recomendación, se considera necesario realizar una evaluación de impacto psicosocial, para determinar los daños materiales e inmateriales de la víctima directa, derivadas de las afectaciones psicoemocionales que presenta como consecuencia de la actuación de las autoridades responsables.

4. En el presente caso, este Organismo estima que la indemnización es procedente en favor de **VD**, persona de quien se tiene por demostrada afectación concreta, en los términos expuestos en el presente Instrumento Recomendatorio. Para determinar el monto, considérense los hechos del caso y los daños acreditados, debiendo ser proporcional a la gravedad de la violación y a las circunstancias, así como acorde a la evaluación económica de los perjuicios evaluables, como consecuencia de las violaciones acreditadas. Por lo que deberá inscribirse a **VD**, en el Registro Estatal de Víctimas, a efecto de que tengan acceso al fondo de ayuda, asistencia, atención y reparación en términos de la Ley de Atención a Víctimas del Estado de Zacatecas.

B) De las medidas de rehabilitación.

1. La rehabilitación debe incluir la atención médica y psicológica, así como los servicios jurídicos y sociales[56], que resulten necesarios, en el caso que nos ocupa, la rehabilitación se refiere a la adquisición de las nuevas competencias que requieran las nuevas circunstancias en que se encuentren las víctimas como consecuencia de la lesión de la que hubieran sido objeto, siempre y cuando se haya materializado esta situación.

2. Las medidas de atención deberán ser brindadas a la víctima de forma gratuita e inmediata, incluyendo la provisión de medicamentos y los gastos directamente relacionados y que sea estrictamente necesarios[57] atendiendo a las especificidades de género y edad de la víctima, previo consentimiento informado, y en los centros más cercanos al lugar de su residencia por el tiempo que sea necesario.

3. En este sentido, según las violaciones a derechos humanos acreditadas en el presente instrumento, **VD**, deberá acceder a medidas de rehabilitación, particularmente al tratamiento psicológico que su estado de salud amerite, por el tiempo que sea necesario hasta su total restablecimiento. Asimismo, debe garantizarse que dichos tratamientos sean efectivamente especializados y que consideren las características de edad y género de la víctima, y eviten condiciones revictimizantes.

C) De las medidas de satisfacción.

1. Respecto a este concepto, de conformidad con lo establecido por los Principios sobre el derecho a obtener reparaciones, ésta debe incluir, cuando sea el caso, la totalidad o parte de las medidas siguientes: medidas eficaces para conseguir que no se continúe con las

[55] ONU, A/RES/60/147, op. Cit., nota 370, párrf.20.
[56] ONU, Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas a las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves al derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, A/RES/60/147, 21 de marzo de 2006, párr.21
[57] Corte IDH, Caso Rosendo Cantú y otra Vs. México, Op.cit., párr. 252.

violaciones; así como la aplicación de sanciones judiciales o administrativas a los responsables de las violaciones.[58]

2. Por tanto, la Secretaría de Seguridad Pública deberá iniciar un procedimiento de responsabilidad administrativa por las omisiones en que incurrieron el **MAESTRO AR1**, en su calidad de Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, y el **I.S.C. AR2,** actualmente Director del Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia, C5I, pues según lo establecido por el artículo 2 de la Ley de Videovigilancia para el Estado de Zacatecas, la videovigilancia en materia de Seguridad Pública estará a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública.

4. Se inicien los procedimientos administrativos serios, objetivos y profesionales de investigación por los hechos denunciados por violación al derecho a la legalidad y seguridad jurídica, en relación con el derecho a la honra, a la dignidad, a la propia imagen, con que deben actuar las autoridades y servidores públicos, relacionado con el derecho de las mujeres a la igualdad y no discriminación por razones de género. Los cuales deberán desarrollarse desde una perspectiva de derechos humanos, de género y bajo un enfoque diferenciado, a través de los cuales se establezca la verdad de los hechos ocurridos. Procedimientos en los que, como se señaló a lo largo del presente documento recomendatorio, deberá salvaguardarse la integridad de la víctima como integrante del colectivo feminista "[...]" y prever las medidas de apoyo que se le otorgarán, de forma que ésta no sea objeto de represalias o revictimización por atreverse a denunciar las violaciones de derechos humanos cometidas en su contra.

5. La Secretaría de Seguridad Pública deberá trabajar ampliamente en la difusión de la prevención de la violencia contra las mujeres por razones de género, como el derecho a la igualdad y no discriminación, así como del derecho a la legalidad y seguridad jurídica, derecho a la honra, derecho a la dignidad y el derecho a la propia imagen, con que deben actuar sus servidoras y servidores públicos y autoridades, atendiendo, además, las consecuencias que las vulneraciones a éstos derechos tienen, desde un enfoque de derechos humanos, haciendo énfasis en la obligación que tiene el personal adscrito o comisionado al Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia, C-5, de garantizar y velar por la integridad de las y los habitantes del territorio estatal, atendiendo que la información obtenida a través de la red estatal de videovigilancia, no podrá obtenerse, clasificarse, custodiarse, o utilizarse en contravención de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley General de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas.

D) De la garantía de no repetición.

1. Las garantías de no repetición son aquellas que se adaptan con el fin de evitar que las víctimas vuelvan a hacer objeto de violaciones a sus derechos humanos y para contribuir a prevenir o evitar la repetición de actos de su misma naturaleza.

2. En este sentido, la Secretaría de Seguridad Pública debe reforzar acciones que prevengan y detengan las expresiones de violencia contra las mujeres, particularmente las que atenten en contra del derecho a la igualdad y no discriminación, así como al derecho a la legalidad y seguridad jurídica con que sus autoridades y servidores públicos deben conducirse.

3. En estricta relación con lo anterior, deberá capacitarse al personal adscrito al Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, incluyendo a su titular, así como al encargado del Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia, en temas de prevención de la violencia contra las mujeres por razones de género,

[58] Ibídem, párr. 22.

del derecho al honor, a la dignidad e imagen, particularmente, respecto al derecho a la igualdad y no discriminación por razones de género, así como en el derecho a la legalidad y seguridad jurídica.

4. Por otro lado, deberán implementarse los mecanismos y procedimientos que correspondan a fin de que las sanciones que establece la Ley de Videovigilancia para el Estado de Zacatecas, para aquellos servidores públicos que se alejen de su deber de manejar la información obtenida de los sistemas de vigilancia conforme lo establece la propia ley, sean puntualmente aplicadas y, con ello, eficaces, a fin de que no queden impunes hechos como los resueltos en la presente Recomendación.

XII. RECOMENDACIONES.

Por lo anterior, y con fundamento en los artículos 1 y 102 apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los numerales 2, 3, 4, 8, 17, 37, 51, 53, 54, 56, 57 y 58 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, se emiten las siguientes Recomendaciones a la **SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO:**

PRIMERA. Dentro de un plazo máximo de un mes, contado a partir de la notificación de la presente recomendación, se inscriba en el Registro Estatal de Víctimas, a **VD** como víctima directa de violaciones a sus derechos humanos, a fin de garantizar que tengan acceso oportuno y efectivo a las medidas de ayuda, asistencia, atención y reparación integral previstas en la Ley de Atención a Víctimas del Estado de Zacatecas.

SEGUNDA. Dentro del plazo máximo de un mes, contado a partir de la notificación de esta Recomendación, si así lo decide la víctima, se brinde la atención psicológica que requiera **VD**, por las posibles afectaciones que pudiera presentar, en relación a los sucesos ocurridos con motivo de los hechos objeto de estudio de la presente Recomendación, y se dé continuidad con dicho tratamiento hasta su total restablecimiento. Debiendo, remitir a este Organismo, las constancias que acrediten su debido cumplimiento.

TERCERA. En un plazo máximo de un mes, posteriores a la aceptación de la presente Recomendación, se inicie un Procedimiento de Responsabilidad Administrativa, en contra del **MAESTRO AR1**, Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública y al **I.S.C. AR2**, Director del Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia. Debiendo remitir a este Organismo las constancias que así lo acrediten.

CUARTA. Dentro del plazo máximo de tres meses, posteriores a la aceptación de esta Recomendación, se capacite al personal adscrito tanto al Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, como al Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia, en el que se deberá incluir al Secretario Ejecutivo y al Director, respectivamente, en temas de derechos humanos, tales como derecho a la legalidad y seguridad jurídica, derecho a la honra, derecho a la dignidad, derecho a la propia imagen, relacionados con el derecho de las mujeres, a la igualdad y no discriminación por razones de género.

QUINTA. En un plazo máximo de tres meses, contados a partir de la aceptación de la presente Recomendación, la Secretaría de Seguridad Pública en conjunto con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, deberán diseñar e implementar un mecanismo para el efectivo tratamiento, consistente en la guarda, inviolabilidad e inalterabilidad, de la información, como es el caso de la imagen de las personas, obtenida a través de la red estatal

de videovigilancia, que capte datos personales, esto atendiendo a lo que establecen la Ley de Videovigilancia para el Estado de Zacatecas, acorde con lo preceptuado por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados, ambas del Estado de Zacatecas.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 53, párrafo segundo de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, se hace del conocimiento de la autoridad a la que va dirigida esta Recomendación, que dispone de un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente en que ésta se le notifique, para que manifieste si la acepta o no, en el entendido de que, de no aceptarla, su respuesta se hará del conocimiento de la opinión pública. En caso de que la acepte, se le notifica que dispone de un plazo de 15 días, contados a partir del vencimiento del término del que disponía para responder sobre la aceptación, a fin de enviar las pruebas de su cumplimiento.

Por último, hágasele saber a las personas quejosas, el resultado de la presente recomendación, así como que, de conformidad con el artículo 61 de la Ley de este Organismo, disponen de 30 días naturales, computados a partir de la fecha de notificación del presente documento, para que en caso de que exista inconformidad con la misma, interponga el recurso de impugnación correspondiente ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Así lo determina y firma

DRA. EN D. MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOS
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE ZACATECAS

c.c.p. Lic. Valente Cabrera Hernández. Titular de la Comisión Ejecutiva de Atención Integral a Víctimas del Estado de Zacatecas. Para su conocimiento e inicio del expediente correspondiente.
c.c.p. Dra. en DD.HH. Argelia Alejandra Rodríguez Ayala, Coordinadora General de Asuntos Jurídicos, para su conocimiento.
c.c.p. Archivo.

Expediente: CDHEZ/027/2019

Persona quejosa: VD.

Persona agraviada: VD.

Autoridad responsable:

I. L. C. Alejandro Tello Cristerna, Gobernador Constitucional del Estado de Zacatecas.

Derechos humanos vulnerados:

I. Derecho a la libertad de expresión, en relación con el ejercicio periodístico.
II. Derecho al honor.
III. Derecho a la propia imagen.

Zacatecas, Zacatecas, a 02 de septiembre de 2021, vistas las constancias y autos que integran el expediente CDHEZ/027/2019, y analizado el proyecto presentado por la Sexta Visitaduría, la suscrita aprobó, de conformidad con los artículos 4, 8 fracción VIII, 17 fracción V, 37, 51 y 56 de la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, en relación con lo dispuesto por los numerales 161, fracciones X, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 y 175 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, la **Recomendación No. 50/2021** que se dirige a la autoridad siguiente:

L. C. ALEJANDRO TELLO CRISTERNA, Gobernador Constitucional del Estado de Zacatecas.

I. DE LA CONFIDENCIALIDAD.

1. De conformidad con los artículos 6º, apartado A, fracción II y 16, párrafo segundo, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 23 y 85 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, los datos personales de los menores, relacionados con esta resolución, permanecerán confidenciales, ya que sus datos personales, así como aquellos relativos a su vida privada y familia, no tienen el carácter de públicos.

II. RELATORÍA DE LOS HECHOS Y OBJETO DE LA CONTROVERSIA.

1. El 25 de enero de 2019, **VD** presentó formal queja, en contra del **L.C. ALEJANDO TELLO CRISTERNA**, Gobernador Constitucional del Estado de Zacatecas, por actos presuntamente violatorios a sus derechos humanos, de conformidad con el artículo 30, de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas.

Por razón de turno, el 25 de enero de 2019, la queja se remitió a la Sexta Visitaduría General, bajo el número de expediente citado al rubro, a efecto de formular el acuerdo de calificación de ésta, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 123 y 124 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas.

El 30 de enero de 2019, la queja se calificó como presunta violación a los derechos humanos de protección de datos personales y al honor, de conformidad con lo establecido

en el artículo 124, fracción I del Reglamento de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas.

2. Los hechos materia de la queja consistieron en lo siguiente:
La quejosa **VD** indicó que, mediante una entrevista radiofónica realizada al **L.C. ALEJANDRO TELLO CRISTERNA**, Gobernador del Estado de Zacatecas, en (...), éste informó que lo estaban (...) con coberturas negativas a su administración, con el fin de que hiciera (...), refiriéndose directamente a la televisora en la que trabaja la quejosa; y que, además, en dicha entrevista mencionó su nombre.

Que una semana después de dicha entrevista, **VD** observó que, en la plaza comercial (…) en la Ciudad de Zacatecas, había un espectacular, el cual, por ambos lados, tenía la fotografía de ella, y una leyenda que de manera textual decía: "*(...)*". Espectacular con el que, a decir de la propia **VD**, se desprestigió y difamó a su persona; pues, se deduce que ella ha solicitado dicha cantidad de dinero.

3. En fecha 08 de febrero de 2019, el **L. C. ALEJANDRO TELLO CRISTERNA**, Gobernador del Estado de Zacatecas, rindió informe de autoridad correspondiente.

III. COMPETENCIA.

1. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas es competente, en términos de los artículos 1º, 4º, 6º, 8º fracción VII, inciso A) y 31 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, en relación con los numerales 15, 22 y 23 de su Reglamento Interno, debido a que, la queja se promueve en contra del Gobernador del Estado de Zacatecas.

2. De conformidad con los artículos 123 y 124 del Reglamento Interior de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, este Organismo advirtió que, de los hechos materia de la queja, se podía presumir la violación de los derechos humanos de **VD**, y la probable responsabilidad del servidor público señalado.

Esta Comisión presumió la violación de los siguientes derechos:
a) Derecho a la libertad de expresión, en relación con el ejercicio periodístico
b) Derecho al honor
c) Derecho a la propia imagen, en relación con la protección de datos personales.

IV. PROCEDIMIENTO ANTE LA COMISIÓN.

Con la finalidad de documentar las presuntas violaciones a derechos humanos, así como para determinar la existencia o no de responsabilidad por parte del servidor público señalado, este Organismo realizó las siguientes actuaciones:

1. Entrevistas a las personas relacionadas con los hechos:
   - El 25 enero de 2019, la quejosa **VD**, presentó ante esta Comisión de Derechos Humanos, queja en contra del **L. C. ALEJANDRO TELLO CRISTERNA**, Gobernador del Estado de Zacatecas, y adjuntó:
     - 1 disco compacto CD.

2. Solicitudes de informe:
   - El 30 de enero de 2019, se solicitó informe de autoridad, al **L. C. ALEJANDRO TELLO CRISTERNA**, Gobernador del Estado de Zacatecas.
   - El 12 de febrero de 2019, se solicitó informe de autoridad, al **L. C. ALEJANDRO TELLO CRISTERNA**, Gobernador del Estado de Zacatecas.

3. Recopilación de información:
   - El 28 de enero de 2019, personal adscrito a este Organismo, redactó acta circunstanciada.

- El 08 de febrero de 2019, se recibió informe de autoridad suscrito por el **L. C. ALEJANDRO TELLO CRISTERNA**, Gobernador del Estado de Zacatecas.
- El 06 de febrero de 2019, se recibió escrito emitido por **VD.**
- El 27 de febrero de 2019, personal adscrito a este Organismo, redactó acta circunstanciada de llamada telefónica.
- El 01 de marzo de 2019, personal de este Organismo, suscribió acta circunstanciada, de llamada telefónica.
- El 06 de mayo de 2019, se recibió el oficio (...), suscrito por la **DOCTORANTE SP1,** presidencia de la mesa directiva de la LXIII Legislatura del Estado de Zacatecas.

4. Recopilación de evidencia *in situ:*
- El 06 de febrero de 2019, personal adscrito a este Organismo, redactó acta circunstanciada de obtención de evidencia *in situ.*

V. PRUEBAS.

Con base en lo estipulado en los artículos 48 y 49 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, en relación con los numerales 150, 151, 152, 153 y 154 del Reglamento Interior de este Organismo, durante el procedimiento realizado por esta Institución, se recabaron los elementos probatorios testimoniales y documentales de la parte quejosa, así como aquellos remitidos por las autoridades señaladas como responsables; mismos que a continuación se detallan:

VI. DERECHOS HUMANOS VULNERADOS.

I. Del derecho a la libertad de expresión.

1. La libertad de expresión juega un papel determinante en la consolidación y funcionamiento de las sociedades democráticas, ya que, además de garantizar la libre circulación de información y, en consecuencia, el más amplio acceso a ésta, comprende también la libertad para expresar nuestros pensamientos y opiniones. Aspectos indispensables para la formación de la opinión pública. De ahí que, en torno a ésta, existan múltiples instrumentos normativos que la protegen y garantizan, al reducir las posibilidades de restringir la circulación de información, ideas y opiniones, por parte de las autoridades de los Estados.

2. Al respecto, la Corte Interamericana ha interpretado que la libertad de expresión tiene dos dimensiones, que adquieren sentido una en función de la otra. La primera, denominada dimensión individual, asegura la posibilidad de utilizar cualquier medio idóneo para difundir el pensamiento propio y llevarlo al conocimiento de los demás. La segunda, conocida como dimensión social, que consiste en el derecho que tienen los receptores a recibir éste.

3. En este sentido, al tener la labor periodística, una incidencia directa en la formación del debate y opinión pública, aunada a la elevada responsabilidad que entraña el ejercicio profesional de ésta, existen un significativo número de estándares dirigidos a minimizar las restricciones a la circulación de información, así como a la protección de los derechos humanos de las y los comunicadores, para asegurar que existan condiciones que permitan la expresión de sus ideas. Toda vez que, la agresión a las y los periodistas, tiene un impacto negativo e intimidatorio en la sociedad.

4. Por ello, las autoridades deben tener un amplio margen de tolerancia frente a afirmaciones y apreciaciones vertidas en torno a cuestiones de interés público, así como a las distintas actividades estatales promovidas por las y los funcionarios públicos, y a aquéllas relacionadas con su gestión. Toda vez que, la actuación del Estado, se encuentra regida por los principios de publicidad y transparencia en la gestión pública. Actividad en la que, los medios de comunicación, coadyuvan de manera permanente, al dar a conocer éstas. De ahí, que no sólo las opiniones coincidentes con el Estado, se encuentren

protegidas bajo el amparo de este derecho, sino, principalmente, aquellas contrarias a las de las y los funcionarios estatales.

5. En razón a ello, la Corte Interamericana se ha pronunciado a favor de la más amplia pluralidad en el ejercicio de la comunicación, por ser éste un componente indispensable de las sociedades democráticas, al fomentar que las personas tengan acceso a una diversidad de opiniones, que les permitan formar expresiones propias sólidas. Así, el ejercicio del periodismo, no puede diferenciarse de la libertad de expresión, al estar ambas actividades evidentemente imbricadas, pues las y los periodistas, son personas que han decidido ejercer la libertad de expresión de modo continuo. Por lo que es fundamental que éstas gocen de la protección y de la independencia necesarias para realizar sus funciones de manera plena.

6. Es por ello, que en el caso *Eduardo Kimel vs. Argentina,* la Corte Interamericana determinó que las opiniones vertidas en ejercicio del derecho de libertad de expresión, no pueden ser objeto de sanciones, sobre todo, cuando se trate de un juicio de valor sobre un acto oficial de un funcionario público en el desempeño de su cargo. En principio, la verdad o falsedad se predica sólo respecto a hechos. De allí, que no puede ser sometida a requisitos de veracidad la prueba respecto de juicios de valor.[1]

7. Ahora bien, a través de la Opinión Consultuva OC-5/85, la Corte estableció que el ejercicio periodístico sólo puede efectuarse cuando las personas que lo realizan no son víctimas de amenazas de agresiones físicas, psíquicas o morales u otros actos de hostigamiento, que constituyen serios obstáculos para el pleno ejercicio de la libertad de expresión. De ahí, que los Estados tengan la obligación de adoptar medidas especiales para la protección de las y los periodistas sometidos a un riesgo especial por el ejercicio de su profesión, entre las cuales, se deben generar mecanismos para salvaguardar su integridad y la vida, dado el interés público de la información que difunden, las zonas a las cuales deben acceder para cumplir con su labor, así como las amenazas o intimidaciones que sufran por la difusión de la información que divulgan. Asimismo, deben impulsar la investigación y sanción efectiva de dichas conductas, o de cualquier otra violación a sus derechos humanos, motivadas por el ejercicio de su profesión.

8. Así pues, el Estado, adquiere una posición de garante, respecto a los derechos de las y los periodistas, que se traduce en el deber no sólo de protegerlos, sino de investigar cualquier agresión, amenaza u hostigamiento que éstos experimenten en razón al ejercicio de la libertad de expresión, a fin de garantizar que ésta no sea ilegítimamente restringida por condiciones de *facto* que coloquen en situación de riesgo o vulnerabilidad a quienes la ejercen. De lo anterior, se desprende la prohibición a las autoridades estatales, de propiciar, favorecer o estimular esa vulnerabilidad. Por lo cual, cualquier restricción o limitación a la libertad de expresión, tanto en sentido formal como material, debe estar previsto en la ley.

9. No obstante, las y los funcionarios, deben tener en cuenta que, en tanto autoridades que poseen una posición de garante de los derechos y libertades fundamentales de las personas, no pueden desconocer éstos, ni injerir directa o indirectamente en el ejercicio de éstos. Por lo cual, ante contextos de polarización política y cuando un medio de comunicación exprese la percepción que se tiene del quehacer gubernamental, es pertinente que las declaraciones de las y los servidores públicos, no acentúen o exacerben situaciones de hostilidad, intolerancia o animadversión por parte de diversos sectores de la sociedad hacia las personas vinculadas con ese medio de comunicación.

10. De lo anterior se desprende que, atendiendo a la alta investidura de las autoridades, así como a la reiteración de sus declaraciones, los discursos pronunciados por éstos pueden traducirse en una omisión de prevenir actos de hostigamiento, amenaza o intimidación en contra de las personas que ejercen el periodismo, ya que éstos pueden derivar en actos de violencia contra ellos, así como en obstaculizaciones a su labor periodística, al poner en entredicho su profesionalismo, ética o revelar información que los pueda colocar en situaciones de riesgo.

---

[1] Cfr. Caso Kimel vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 2 de mayo de 2008, Serie C No. 177, párr. 93.

11. En razón a ello, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha prestado especial atención a la situación de la libertad de prensa, así como a la seguridad de quienes ejercen el periodismo en esta Región, dando cuenta de las múltiples amenazas y ataques que éstos enfrentan de manera sistemática. Actos que abarcan desde los ataques, intimidaciones, hostigamiento, hasta las desapariciones y asesinatos. Los cuales, tienen un objetivo en común, suprimir el derecho de las y los periodistas a expresarse libremente, y a consolidar una sociedad informada.

12. En el caso específico de las mujeres, éstas enfrentan una interseccionalidad que las coloca ante otros factores de riesgo adicionales a las de sus pares varones, tales como las violaciones a sus derechos humanos basadas en el género y a la prevalencia de patrones y estereotipos socioculturales discriminatorios, que tienden a desvalorizar su trabajo periodístico y a estigmatizar el tipo de temáticas que pueden abordar. Así, la Federación de Periodistas, señaló que, los actos más usuales de violencia en razón de género, reportados por las periodistas, incluyen el maltrato verbal (63%) y el maltrato psicológico (41%). Lo anterior da cuenta de que, las mujeres periodistas, sufren formas específicas de violencia ejercidas en su contra, que tienen el objetivo común de acallar sus opiniones, ya sea través de la intimidación o bien, a través de la denostación de su profesionalismo.

13. Ahora bien, es importante tener presente que, todo discurso expresivo, aun aquel que no sea recibido con beneplácito, sino que puede resultar ofensivo, debe ser tolerado por las autoridades estatales, aunque les resulten políticamente incómodos, o les causen descontento, por la línea editorial crítica que los caracterice. Así, de manera específica, la Corte Interamericana señaló, en el caso Granier y otros vs. Venezuela, que no es posible realizar una restricción al derecho a la libertad de expresión con base en la discrepancia política, que pueda generar una determinada línea editorial a un Gobierno. Haciendo énfasis en que “el derecho a la libertad de expresión no solo debe garantizarse en lo que respecta a la difusión de información o ideas que son recibidas favorablemente o consideradas como inofensivas o indiferentes, sino especialmente en lo que toca a las que resultan ingratas para el Estado o cualquier sector de la población”.[2]

14. Protección que se ve reflejada también en el Sistema Universal, a través de la Observación General No. 34 del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, quien señaló que la protección de la libertad de expresión consagrada en el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos incluye la expresión y recepción de comunicaciones sobre toda clase de ideas y opiniones que puedan transmitirse a otros, incluidos el pensamiento político, los comentarios sobre asuntos públicos, la discusión sobre derechos humanos, entre otros. Protección que considera, llega incluso a expresiones que se puedan considerar profundamente ofensivas.[3]

15. Tenemos entonces, que en las sociedades democráticas, existe una especial protección hacia aquellos discursos de carácter político y sobre asuntos de interés público, toda vez que, como se ha señalado, en un sistema democrático y plural, se exige que los funcionarios públicos y su gestión estén expuestos a un nivel alto de control por una opinión pública vigorosa e informada, intolerante con la corrupción. Es por ello, que la Comisión Interamericana ha definido a la libertad de expresión como el “derecho del individuo y de toda la comunidad a participar en debates activos, firmes y desafiantes respecto de todos los aspectos vinculados al funcionamiento normal y armónico de la sociedad”.[4]

16. Un ejemplo de la aplicación de este criterio de protección sobre las expresiones relacionadas con asuntos de interés público, lo encontramos en el caso Tristán Donoso vs. Panamá, en el cual, la Corte Interamericana determinó que las expresiones directamente

---

[2] Corte IDH, caso Granier y otros («Radio Caracas Televisión») vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de junio de 2015, serie C núm. 293, párr.148.
[3] Naciones Unidas. Comité de Derechos Humanos. Observación General 34 – Artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Libertad de opinión y libertad de expresión. CCPR/C/ GC/34 (11 a 29 de julio de 2011).
[4] CIDH, Informe Anual 1994. Capítulo V (Informe sobre la compatibilidad entre las leyes de desacato y la Convención Americana sobre Derechos Humanos). Título III, OEA/Ser. L/V/II.88. doc. 9 revs., 17 de febrero de 1995; CIDH, alegatos ante la Corte IDH en el caso Ricardo Canese vs. Paraguay. Transcritos en: Corte IDH, caso Ricardo Canese vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2004, serie C núm. 111, párr. 72-c); CIDH, Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Marco jurídico interamericano sobre la libertad de expresión. OEA/Ser.L/V/II. CIDH/RELE/INF.2/09, 30 diciembre 2009, párr. 34

atinentes a un asunto de interés público, incluidas aquellas relativas a la conducta oficial de un funcionario público. De ahí, que determinara que, en cuestiones de interés público, siempre debe ponderarse el respeto a los derechos o la reputación de los demás, con el valor que tienen en una sociedad democrática el debate abierto sobre temas de interés o preocupación pública. Por lo cual, el procesamiento penal de periodistas o comunicadores sociales, por el mero hecho de investigar, escribir y publicar información de interés público, es violatorio a la libertad de expresión, ya que desconoce el nivel de protección especial que les otorga la Convención Americana al debate público de asuntos de interés para la sociedad.

17. Por las mismas razones, la Convención Americana otorga un nivel reforzado de protección a las expresiones sobre funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones y sobre candidatos a ocupar argos públicos, pues, el escrutinio ciudadano sobre la conducta oficial de quienes efectúan dicha gestión o se canalizan para efectuarla, es parte esencial del control de la gestión pública. En consecuencia, las expresiones, informaciones, opiniones y mensajes atinentes a estos tópicos deben ser objeto de menores restricciones o limitaciones por las autoridades.[5]

18. En correspondencia con lo anterior, los funcionarios públicos y los candidatos a ocupar cargos públicos deben estar mayormente expuestos al escrutinio de la ciudadanía, por lo cual, deben mostrar mayor nivel de tolerancia a la crítica, y el derecho internacional les otorga a este respecto un umbral de protección diferente del que otorga a los particulares. Así, las actividades que los funcionarios estatales realizan, al poseer un carácter público, los expone a un mayor número de críticas, y tienen un nivel diferente de protección judicial de su honra, imagen y reputación, a la luz de la función democrática de la libertad de expresión, tomando en consideración las amplias posibilidades de defensa que éstos tienen, dado su poder de convocatoria, su influencia social y acceso a los medios, así como al hecho de que se han expuesto voluntariamente al escrutinio ciudadano al acceder a un cargo público.

19. Al respecto, la Corte Interamericana ha explicado que la obstrucción o el silenciamiento de este tipo de discursos vulnera la libertad de expresión en sus dimensiones individual y colectiva, por ser contrarias a la función democrática que desempeña la prensa, consistente en el derecho a informar y criticar libremente al Gobierno, pues, el control democrático a través de la opinión pública fomenta la transparencia de las actividades estatales y promueve la responsabilidad de los funcionarios sobre su gestión.

20. Ahora bien, como cualquier otro derecho humano, la libertad de expresión no es un derecho absoluto, al estar sujeta a limitaciones bajo estrictas condiciones. Sin embargo, éstas deben estar claramente definidas en las disposiciones legales de los Estados, y deben buscar proteger los derechos o la reputación de los demás, en su calidad de particulares, así como tender a garantizar la seguridad nacional, el orden público o la salud. Asimismo, deben ser objeto de constantes revisiones.

21. Sin embargo, el máximo tribunal interamericano ha hecho énfasis en que, las limitaciones de la libertad de expresión, no pueden establecerse ni generarse a través de medios indirectos que, a pesar de ser sutiles, son efectivos en cuanto al cercenamiento de la libertad de expresión. Entre las cuales, se encuentran el uso de atribuciones estatales con el objetivo de intimidar o acosar a periodistas o a los directivos de medios de comunicación críticos; la realización de declaraciones por funcionarios públicos que puedan ejercer una interferencia o presión lesiva sobre quienes ejercen su libertad de expresión, especialmente los y las periodistas; la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad estatal en función de la línea editorial o informativa de medios de comunicación, por la facilidad con la que así se desfinanciarían voces críticas o bien, actos de violencia o intimidación contra periodistas o comunicadores sociales.

22. Este aspecto, fue analizado por la Corte en el caso Ríos y otros vs. Venezuela, en el cual precisó que, si las autoridades dan a ciertos periodistas o trabajadores de medios de comunicación un trato distinto y desfavorable en virtud de su pertenencia a un medio crítico

[5] CIDH, Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Marco jurídico interamericano sobre la libertad de expresión. OEA/Ser.L/V/II. CIDH/RELE/INF.2/09, 30 diciembre 2009, párrs. 39-40

con el Gobierno, están incurriendo en un trato diferenciado por opiniones políticas, lo cual constituye una conducta discriminatoria, prohibida por los artículos 13 y 24 de la Convención americana.

23. Es por ello que, en el caso particular de que quien alegue una afectación a la honra o la reputación sea un funcionario público, entran en juego las reglas sobre la especial protección del discurso de interés público y sobre la mayor exposición voluntaria al escrutinio público y el mayor grado de tolerancia a la crítica que deben exhibir quienes tengan esa calidad. La principal consecuencia es que, en el ejercicio de ponderación entre el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la honra o reputación de un funcionario público, se ha de partir de la prevalencia prima facie o, en principio, de la libertad de expresión, dado el interés democrático en el debate sobre asuntos públicos, que aumenta su valor ponderado.

24. En razón a lo anterior, se han generado sendos protocolos y manuales de actuación, dirigidos a proteger los derechos de las personas que ejercen el periodismo, así como a investigar los delitos cometidos en contra de su libertad de expresión. Así, el 25 de junio de 2012, se publicó, en el Diario Oficial de la Federación, la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y, en adición, en septiembre de 2017, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, publicó el *Protocolo de actuación para la protección de los derechos de la libertad de las personas que ejercen el periodismo,* mientras que, en octubre de 2018, la Procuraduría General de la República, publicó el *Protocolo Homologado de Investigación de delitos cometidos contra la libertad de expresión*.

25. En la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, se define como periodista, a las personas físicas, así como medios de comunicación y difusión públicos, comunitarios, privados, independientes, universitarios, experimentales o de cualquier otra índole cuyo trabajo consiste en recabar, generar, procesar, editar, comentar, opinar, difundir, publicar o proveer información, a través de cualquier medio de difusión y comunicación que puede ser impreso, radioeléctrico, digital o imagen.[6] Asimismo, se define como agresiones, a el daño a la integridad física o psicológica, amenaza, hostigamiento o intimidación que por el ejercicio de su actividad sufran las personas periodistas.[7]

26. De lo esgrimido en párrafos anteriores, se desprende que, las personas que ejercen el periodismo como una actividad profesional, cuentan con una especial protección de su derecho a la libertad de expresión, toda vez que, con su actividad, contribuyen a consolidad y fortalecer el estado democrático, al propiciar la pluralidad de ideas y el escrutinio público sobre asuntos de interés social. Situación que, frecuentemente, las y los coloca en un estado de vulnerabilidad, particularmente si sus afirmaciones, expresiones y opiniones son contrarias a la línea gubernamental establecida. Motivo por el cual, tanto a nivel internacional como local, se ha desarrollado un andamiaje jurídico para proteger y salvaguardar sus derechos humanos, principalmente, aquellos relacionados con su integridad y la vida.

27. Asimismo, se ha hecho hincapié en que, las y los funcionarios públicos, tienen la obligación de no coartar el derecho a la libertad de expresión de las y los periodistas, bajo el argumento de que sus discursos atentan contra su honor y reputación, toda vez que éstos, al encontrarse en una jerarquía de poder superior a aquéllos, aunado al hecho de que voluntariamente se han expuesto al escrutinio público, tienen el deber de proteger y garantizar sus derechos, dado la posición de garante que asumen, en tanto autoridades estatales.

II. Derecho al honor

28. En el marco del derecho nacional, esta prerrogativa se encuentra previstas de manera indirecta en los artículos 16 y 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos

[6] Artículo 2, de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
[7] Ídem.

Mexicanos, así, el primer párrafo del artículo 16 del mismo instrumento normativo señala que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Por su parte, el artículo 25 constitucional establece como uno de los fines del desarrollo nacional a cargo del Estado, garantizar el pleno ejercicio de la dignidad de las personas.

29. La Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 11, establece que toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad, y que nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación. En similares términos se encuentra prevista en los artículos 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, V de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

30. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció en el "Caso Mémoli vs. Argentina" que: "La protección a la honra establecida en el artículo 11 de la Convención, como se sabe, prohíbe toda injerencia arbitraria o abusiva en la vida privada de las personas o ataques ilegales a su honra o reputación. Ello torna legítimo que quien se considere afectado en su honor recurra a los medios judiciales que el Estado haya dispuesto. En tanto derecho humano protegido por la Convención, se aplica análogo deber de garantía por parte del Estado, por lo que éste se encuentra obligado a asegurar que el derecho a la honra pueda ser protegido a plenitud poniendo a disposición de las personas los medios apropiados para ese efecto. Dentro de esta protección a la honra, en general, merece consideración el denominado "honor objetivo", que es, en esencia, el valor que los demás le asignan a la persona en cuestión en tanto se afecte la buena reputación o la buena fama de que goza en el entorno social en el que se desenvuelve.".[8]

31. En el mismo caso, el Tribunal Interamericano indicó que: "(…) el artículo 11.3 de la Convención impone a los Estados el deber de brindar la protección de la ley contra aquellas injerencias. El Estado se encuentra obligado a garantizar a las personas que se sientan afectas en su derecho al honor, los medios judiciales apropiados para que se establezcan las responsabilidades y sanciones correspondientes. De no hacerlo, el Estado podría incurrir en responsabilidad internacional. En consecuencia, el Estado tiene la obligación de garantizar el derecho a la honra y la reputación mediante acciones positivas, lo cual puede implicar, en ciertos casos, la adopción de medidas dirigidas a asegurar dicho derecho protegiéndolo de las interferencias de las autoridades públicas, así como también de las personas o instituciones privadas, incluyendo los medios de comunicación".[9]

32. Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha emitido una definición del honor de la manera siguiente: "(…) definir al honor como el concepto que la persona tiene de sí misma o que los demás se han formado de ella, en virtud de su proceder o de la expresión de su calidad ética y social. Todo individuo, al vivir en sociedad, tiene el derecho de ser respetado y considerado y, correlativamente, tiene la obligación de respetar a aquellos que lo rodean. En el campo jurídico esta necesidad se traduce en un derecho que involucra la facultad que tiene cada individuo de pedir que se le trate en forma decorosa y la obligación de los demás de responder a este tratamiento. Por lo general, existen dos formas de sentir y entender el honor: a) en el aspecto subjetivo o ético, el honor se basa en un sentimiento íntimo que se exterioriza por la afirmación que la persona hace de su propia dignidad; y b) en el aspecto objetivo, externo o social, como la estimación interpersonal que la persona tiene por sus cualidades morales y profesionales dentro de la comunidad. En el aspecto subjetivo, el honor es lesionado por todo aquello que lastima el sentimiento de la propia dignidad. En el aspecto objetivo, el honor es lesionado por todo aquello que afecta a la reputación que la persona merece, es decir, el derecho a que otros no condicionen negativamente la opinión que los demás hayan de formarse de nosotros".[10]

---

[8] Voto concurrente de Diego García-Sayán en el "Caso Memoli vs. Argentina", Párr. 11
[9] "Caso Mémoli vs. Argentina", sentencia de 22 de agosto de 2013, Párr. 125.
[10] **Registro digital:** 2005523, **Instancia:** Primera Sala, **Décima Época, Materia(s):** Constitucional, **Tesis:** 1a./J. 118/2013 (10a.), **Fuente:** Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I, página 470, **Tipo:**

33. De igual forma, la misma Suprema Corte, ha sostenido lo siguiente: "(…) por daño moral debe entenderse la alteración profunda que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspectos físicos, o bien, en la consideración que de sí misma tienen los demás, producida por un hecho ilícito.[11]

34. De ahí que, en el sistema jurídico mexicano, los conceptos de honor y reputación se relacionan fundamentalmente con la dignidad, buena fama, prestigio, concepto público y buen nombre.[12] En definitiva, se tiende a la protección de las esferas individual y colectiva en relación con el valor intrínseco de la persona.

35. Si acorde a las características que conforman a los derechos humanos, éstos no recaen sobre cosas materiales, sino que otorgan acción para lograr que el Estado respete los derechos garantizados, y se consideran esenciales e inherentes al ser humano y derivados de su propia naturaleza, resulta lógico que los atributos de la personalidad se enlacen directamente con tales derechos, pues los mencionados atributos tienen una coincidencia con las libertades protegidas por los derechos del hombre como son los concernientes al honor, a la intimidad y a la propia imagen que constituyen derechos subjetivos del ser humano, en tanto que son inseparables de su titular, quien nace con ellos, y el Estado debe reconocerlos. Como no recaen sobre bienes materiales, sino sobre la personalidad de los individuos, son generales porque corresponden a todos los seres humanos, y no pueden considerarse renunciables, transmisibles o prescriptibles, porque son inherentes a la persona misma, es decir, son intrínsecos al sujeto quien no puede vivir sin ellos.

36. Ahora, del contenido expreso del artículo 1° constitucional se advierte que nuestro país actualmente adopta una protección amplia de los derechos humanos, mediante el reconocimiento claro del principio *pro personae*, como rector de la interpretación y aplicación de las normas jurídicas, en aquellas que favorezcan y brinden mayor protección a las personas, aunado a que también precisa de manera clara la obligación de observar los tratados internacionales firmados por el Estado Mexicano al momento de aplicar e interpretar las normas jurídicas en las que se vea involucrado este tipo de derechos, como son los señalados atributos de la personalidad conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y en casos en los que se involucra la posible afectación por daño moral de un atributo de la personalidad -en su vertiente del derecho al honor- debe aplicarse la tutela y protección consagrada en los principios reconocidos al efecto en nuestra Carta Magna, con independencia de que no exista una referencia expresa en el texto constitucional hacia la salvaguarda concreta del citado atributo, pues la obligación de protección deriva de disposiciones contenidas en dos tipos de ordenamientos superiores -Constitución y tratados internacionales- con los que cuenta el Estado Mexicano.

III. Derecho a la propia imagen.

37. Respecto al presente tópico, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el derecho a la intimidad es el derecho del individuo a no ser conocido por otros en ciertos aspectos de su vida y, por ende, el poder de decisión sobre la publicidad o información de datos relativos a su persona, familia, pensamientos o sentimientos, mientras que el derecho a la propia imagen, debe ser considerado como aquel derecho de decidir, en forma libre, sobre la manera en que elige mostrarse frente a los demás, por consiguiente, al constituir derechos inherentes a la persona, fuera de la injerencia de los demás, se configuran como derechos de defensa y garantía esencial para la condición humana, ya que pueden reclamarse tanto en defensa de la intimidad violada o amenazada, como exigir del Estado que prevenga la existencia de eventuales intromisiones que los lesionen por lo que,

---

Jurisprudencia

[11] **Registro digital:** 160425, **Instancia:** Tribunales Colegiados de Circuito, **Décima Época, Materia(s):** Civil **Tesis:** I.3o.C. J/71 (9a.), **Fuente:** Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro IV, Enero de 2012, Tomo 5, página 4036, **Tipo:** Jurisprudencia

[12] **Registro digital:** 2004895, **Instancia:** Tribunales Colegiados de Circuito, **Décima Época, Materia(s):** Común, **Tesis:** XVIII.4o.7 K (10a.), **Fuente:** Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXVI, Noviembre de 2013, Tomo 2, página 1310, **Tipo:** Aislada

si bien no son absolutos, sólo por ley podrá justificarse su intromisión, siempre que medie un interés superior.[13]

38. Por su parte, la Segunda Sala del más Alto Tribunal del país, precisó que el derecho a la imagen debe entenderse como parte del derecho a la identidad, y como un derecho personalísimo que tiene todo individuo de decidir cómo se muestra a los demás, esto es, la potestad de disponer en el ámbito de su propia autoridad y en forma libre sobre su propia imagen.[14]

39. En la doctrina se conceptualiza al derecho a la propia imagen como “La facultad que a cada persona corresponde, o debe corresponder, para prohibir o autorizar que su figura o imagen sea reproducida, utilizada o exhibida, con fines lucrativos o sin ellos.”[15] Para Novoa Monreal, este derecho es considerado como: “la posibilidad de su titular de manifestar su rechazo expreso a que su imagen sea conservada por otro”.[16]

40. Entonces, el derecho a la imagen es la facultad que tiene todo individuo a permitir o autorizar su reproducción, su publicación, así como a impedir a un tercero dicha reproducción o publicación. Este derecho, según Quintana está ligado a los derechos de la personalidad.[17] El derecho a la propia imagen, de acuerdo a la doctrina civil, es estudiado como una manifestación del derecho de la personalidad, los derechos de la personalidad se clasifican como: 1. Derecho a la vida y a la integridad física. 2. Derecho a la libertad (libertades públicas). 3. Derecho al honor y a la reserva. El derecho a la imagen constituye la principal manifestación del derecho a la reserva. 4. Derecho a la identidad personal. 5. Derecho moral de autor.[18]

41. El derecho a la propia imagen, como derecho subjetivo, tiene dos vertientes, una positiva, que es la facultad personalísima de captar, imprimir, difundir, publicar o distribuir nuestra imagen; la otra vertiente es la facultad para impedir la obtención, reproducción, difusión y distribución de su imagen por un tercero, si ella no ha otorgado su consentimiento para tal efecto.[19]

42. Así, la dignidad humana tutela el derecho a ser reconocido y a vivir en y con la dignidad de la persona humana, y del cual se desprenden todos los demás derechos, necesarios para que los individuos desarrollen integralmente su personalidad, dentro de los que se encuentran, entre otros, los relativos a: la vida, la integridad física y psíquica, al honor, a la privacidad, al nombre, a **la propia imagen**, al libre desarrollo de la personalidad, al estado civil y el propio derecho a la dignidad personal.

43. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al resolver el caso Fontevecchia y D'Amico vs. Argentina (Fondo, Reparaciones y Costas), sentencia de 29 de noviembre de 2011, párrafo 67, sostuvo que aunque el derecho a la propia imagen no se encuentra expresamente enunciado en el artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, las imágenes o fotografías personales están incluidas dentro del ámbito de protección de la vida privada, y que la fotografía es una forma de expresión que recae en el ámbito de protección del artículo 13 de la propia convención.

44. Lo anterior ha sido retomado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y sus Organismos, sosteniendo que el derecho a la propia imagen es personalísimo, y únicamente faculta a su titular a decidir en forma libre, sobre la manera en que elige mostrarse frente a los demás y, por consiguiente, se configura, junto con otros también personalísimos (a la intimidad y a la identidad personal y sexual), como un derecho de defensa y garantía

---

[13] **Registro digital:** 165821, **Instancia:** Pleno, **Novena Época, Materia(s):** Civil, Constitucional, **Tesis:** P.LXVII/2009, **Fuente:** Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXX, Diciembre de 2009, página 7, **Tipo:** Aislada

[14] **Registro digital:** 2011892, **Instancia:** Segunda Sala, **Décima Época, Materia(s):** Constitucional, **Tesis:** 2a. XXV/2016 (10a.), **Fuente:** Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 31, Junio de 2016, Tomo II, página 1206, **Tipo:** Aislada

[15] Guillermo Cabanellas (Carbanellas, 1996: 103)

[16] Novoa Monreal, 1997:71

[17] Quintana, 1949: 140

[18] Según De Cupis (1950: 27-30)

[19] Rovira Sueiro, María E., “El Derecho a la Propia Imagen (especialidades de la responsabilidad civil en este ámbito), Granada, Biblioteca Comares de Ciencias Jurídicas, 2000, p. 33.

esencial para la condición humana[20]. Recientemente, al resolver el Amparo Directo en Revisión 4083/2020, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, interpretó que el derecho a la propia imagen es un derecho fundamental, en virtud de que deriva de la dignidad humana, principio que a su vez está implícitamente contenido en el artículo 1º constitucional. Asimismo, que la imagen que uno conserva para mostrarse a los demás, se encuentra dentro del derecho a la intimidad, constituyéndose como derechos personalísimos, pertenecientes al ámbito propio del ser humano, fuera de la injerencia de personas extrañas, de tal manera que "[e]l individuo tiene el derecho de decidir, en forma libre, sobre su propia imagen".

45. En esa misma resolución, la Suprema Corte interpretó que la regulación entre los derechos del autor y los del titular de la imagen están reguladas por la Ley Federal del Derecho de Autor, en esta legislación, concretamente en el artículo 87, se protege el derecho a la propia imagen en aquellos casos en los que la utilización de una imagen se hace sin el consentimiento de su titular, al tiempo que contempla la posibilidad de recibir una indemnización específica por la vulneración a ese derecho (artículo 216 Bis) a través una acción judicial de reparación del daño (artículo 213), además de prever otros mecanismos para la defensa y protección de la propia imagen.

46. Finalmente, se hace necesario advertir que la Primera Sala del más Alto Tribunal del país, sostuvo un criterio mediante el cual hace referencia que cuando el acto de molestia constituye la toma de fotografías a personas que no han sido puestas a disposición del Ministerio Público en calidad de detenidas o presuntas responsables, este acto menoscaba o restringe derechos de la persona, al hacer uso de su imagen, aunado a que la obtención de fotografías puede resultar violatoria de los derechos a la honra y a la dignidad contenidos en los artículos 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, si el Estado incumple con sus obligaciones relativas a la protección de datos personales, las cuales consisten en: a) solicitar o registrar información que contenga datos personales sólo en los casos previstos por la ley; y, b) tratar confidencialmente tales datos, lo que implica utilizarlos o revelarlos sólo con el consentimiento de la persona a quien correspondan. Así, el hecho de que la autoridad obtenga fotografías de cualquier persona, sin importar su situación jurídica, efectivamente representa un menoscabo y un deterioro en sus derechos, de naturaleza continuada, pues mientras el resultado del acto (las fotografías) no se elimine, el acto de molestia continúa.[21]

47. El derecho a la propia imagen también se encuentra protegido como dato personal, para lo cual debemos remitirnos a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, que establece que son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a su información y proteger los datos personales que obren en su poder: cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo, Judicial y de los Municipios, organismos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos y de asociaciones civiles, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito estatal y municipal.[22] Asimismo, que los sujetos obligados deberán cumplir con la obligación de proteger y resguardar la información clasificada como reservada o confidencial[23].

48. Entonces, podrá clasificarse como información reservada, la publicación que pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física; así como las previstas en tratados internacionales[24]. Mientras que la clasificación de información confidencial es aquella que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable. La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello[25]. Esta Ley establece que, en lo referente a la información

---

[20] **Registro digital:** 2013415, **Instancia:** Tribunales Colegiados de Circuito, **Décima Época, Materia(s):** Constitucional, Administrativa, **Tesis:** I.7o.A.144 A (10a.), **Fuente:** Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 38, Enero de 2017, Tomo IV, página 2513, **Tipo:** Aislada.
[21] **Registro digital:** 166037, **Instancia:** Primera Sala, **Novena Época, Materia(s):** Penal, **Tesis:** 1a. CLXXXVIII/2009, **Fuente:** Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Noviembre de 2009, página 401, **Tipo:** Aislada
[22] Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, artículo 23
[23] Ídem, artículo 24, fracción VII
[24] Ídem, artículo 82, fracciones I y IX *in fine*.
[25] Ibídem, artículo 85

confidencial se estará a lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Zacatecas.

49. Por su parte, la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Zacatecas, estipula que son sujetos obligados por esa Ley, en el ámbito estatal y municipal, cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, ayuntamientos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos del Estado de Zacatecas[26], y que uno de sus objetivos es proteger los datos personales en posesión de cualquiera de las autoridades, entidades, órganos y organismos señalados. Entendiendo por datos personales cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable, considerando que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o indirectamente a través de cualquier información, los datos personales se clasifican como, datos personales sensibles, siendo éstos los refieren a la esfera más íntima de su titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. De manera enunciativa mas no limitativa la ley en comento considera como datos sensibles los datos personales que puedan revelar aspectos como origen racial o étnico, estado de salud presente o futuro, información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, opiniones políticas y preferencia sexual; y datos personales biométricos, los rasgos físicos, biológicos o de comportamiento de un individuo que lo identifican como único del resto de la población; huellas dactilares, geometría de la mano, análisis del iris, análisis de retina, venas del dorso de la mano, rasgos faciales, patrón de voz, firma manuscrita, dinámica de tecleo, cadencia del paso al caminar, análisis gestual y análisis del ADN[27].

50. Por su parte, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, ha establecido que: *“Los datos personales son cualquier información que refiera a una persona física que pueda ser identificada a través de los mismos, los cuales se pueden expresar en forma numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo, como por ejemplo:* ***nombre, apellidos****, CURP, estado civil, lugar y fecha de nacimiento, domicilio, número telefónico, correo electrónico, grado de estudios, sueldo, entre otros. Dentro de los datos personales hay una categoría que se denomina datos personales sensibles, que requieren especial protección, ya que refieren a información que puede revelar aspectos íntimos de una persona o dar lugar a discriminación, como el estado de salud, información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, afiliación sindical opiniones políticas, origen racial o étnico y preferencia sexual, por mencionar algunos”.*[28]

51. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha referido en varias tesis a los rasgos característicos de la noción de lo "privado". Así, lo ha relacionado con: lo que no constituye vida pública; el ámbito reservado frente a la acción y el conocimiento de los demás; lo que se desea compartir únicamente con aquellos que uno elige; las actividades de las personas en la esfera particular, relacionadas con el hogar y la familia; o aquello que las personas no desempeñan con el carácter de servidores públicos. Por otro lado, el derecho a la vida privada (o intimidad) está reconocido y protegido en declaraciones y tratados de derechos humanos que forman parte del orden jurídico mexicano, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 12), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 17), la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo11) y la Convención sobre los Derechos del Niño (artículo16). Al interpretar estas disposiciones, los organismos internacionales han destacado que la noción de vida privada atañe a la esfera de la vida en la que las personas pueden expresar libremente su identidad, ya sea en sus relaciones con los demás o en lo individual, y han destacado su vinculación con un amplio abanico de otros derechos, como la inviolabilidad de la correspondencia y de las comunicaciones en general, la inviolabilidad del domicilio, las garantías respecto de los registros personales y corporales, las relacionadas con la recopilación y registro de información personal en bancos de datos y otros dispositivos; el derecho a una vivienda adecuada, a la salud y a la igualdad; los derechos reproductivos, o la protección en caso de desalojos forzados. Las afirmaciones contenidas en las resoluciones nacionales e

---

[26] Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Zacatecas, artículo 1, párrafo cuarto
[27] Ídem artículo 3, fracción VIII, incisos a y b
[28] INAI. “Guía práctica para ejercer el Derecho a la Protección de Datos Personales”, pág. 3. CNDH. Recomendación 53/2016, p. 98.

internacionales son útiles en la medida en que no se tomen de manera descontextualizada, emerjan de un análisis cuidadoso de los diferentes escenarios jurídicos en los que la idea de privacidad entra en juego y no se pretenda derivar de ellas un concepto mecánico de vida privada, de referentes fijos e inmutables. Lo único que estas resoluciones permiten reconstruir, en términos abstractos, es la imagen general que evoca la idea de privacidad en nuestro contexto cultural.[29]

52. Según esta noción, las personas tienen derecho a gozar de un ámbito de proyección de su existencia que quede reservado de la invasión y la mirada de los demás, que les concierna sólo a ellos y les provea de condiciones adecuadas para el despliegue de su individualidad -para el desarrollo de su autonomía y su libertad-. A un nivel más concreto, la misma idea puede describirse apelando al derecho de las personas a mantener fuera del conocimiento de los demás (o, a veces, dentro del círculo de sus personas más próximas) ciertas manifestaciones o dimensiones de su existencia (conducta, datos, información, objetos) y al correspondiente derecho a que los demás no las invadan sin su consentimiento. En un sentido amplio, entonces, **la protección constitucional de la vida privada implica poder conducir parte de la vida de uno protegido de la mirada y las injerencias de los demás**, y guarda conexiones de variado tipo con pretensiones más concretas que los textos constitucionales actuales reconocen a veces como derechos conexos: el derecho de poder tomar libremente ciertas decisiones atinentes al propio plan de vida, el **derecho a ver protegidas ciertas manifestaciones de integridad física y moral, el derecho al honor o reputación, el derecho a no ser presentado bajo una falsa apariencia, el derecho a impedir la divulgación de ciertos hechos o la publicación no autorizada de cierto tipo de fotografías,** la protección contra el espionaje, la protección contra el uso abusivo de las comunicaciones privadas, o la protección contra la divulgación de informaciones comunicadas o recibidas confidencialmente por un particular[30].

53. De esa manera es que se ha determinado que la propia imagen de las personas es un dato personal que debe ser protegido por los sujetos obligados. Por tanto, lo procedente a continuación, es desarrollar el tema, considerando a la propia imagen como un derecho fundamental y un dato personal, lo cual se realiza atendiendo a la transversalidad de los derechos humanos, en conjunto con los derechos al honor y a la libertad de expresión, en relación con la actividad periodística, los cuales quedaron debidamente desarrollados en los párrafos precedentes.

54. En el presente caso, **VD** señaló que, el (...), durante la transmisión de un programa radiofónico, transmitido a través de la emisora “Radio Zacatecas”, el Gobernar del Estado, **ALEJANDRO TELLO CRISTERNA,** la acusó de (…) para obtener *(...),* mediante la difusión de noticias y opiniones negativas acerca de su administración gubernamental.

55. Al respecto, el **L. C. ALEJANDRO TELLO CRISTERNA**, Gobernador Constitucional del Estado de Zacatecas, confirmó que, en el mes de (...), dio una entrevista para el noticiero “A Tiempo”, con **SP2**, donde habló sobre temas de interés social, entre ellos, los ataques mediáticos por parte de dos televisoras, entre ellas, (...); afirmando que, lo que él señaló fue “*(...)*”, pero que, en ningún momento de la entrevista, se refirió, señaló o acusó directamente a la conductora que lo estuviera (…), e hizo hincapié que no se le señaló como (…). Por otro lado, argumentó que los temas que expuso en el noticiero fueron en atención a su derecho de libertad de expresión, sobre temas de interés general, derecho que no le debe ser coartado por el cargo que ostenta. Finalmente, refirió que la quejosa permitió que transcurrieran 7 meses a fin de interponer la queja, que ahora se resuelve, haciendo el señalamiento que, si la quejosa consideraba que se actualizaban violaciones graves a sus derechos humanos, en todo caso debió acudir de inmediato ante este Organismo protector de los derechos humanos.

56. Previo a entrar en materia, se hace necesario remitirnos al contenido del artículo 31, de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, que establece el plazo en el cual las personas que se consideren víctimas de vulneración a sus derechos

---

[29] **Registro digital:** 165823, **Instancia:** Primera Sala, **Novena Época, Materia(s):** Constitucional, **Tesis:** 1a. CCXIV/2009, **Fuente:** Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXX, Diciembre de 2009, página 277, **Tipo:** Aislada

[30] Ídem

humanos, pueden acudir ante este Organismo. Así, el numeral de referencia, señala que la queja sólo podrá presentarse dentro del plazo de **un año**, a partir de que se hubiera iniciado la ejecución de los hechos que se estimen violatorios o de que el quejoso hubiese tenido conocimiento de los mismos y que, en casos excepcionales, al tratarse de infracciones graves a los derechos humanos la Comisión podrá ampliar dicho plazo mediante una resolución razonada. Finalmente, que no correrá plazo alguno cuando se trate de hechos que por su gravedad puedan ser considerados violaciones de lesa humanidad. Por tanto, atendiendo al marco legal en cita, la queja presentada por **VD** se encuentra dentro del plazo legal que para tal efecto estableció el legislador zacatecano.

57. Otro punto que trasciende es que, en el presente caso, se trata de una queja presentada por una persona que ejerce el periodismo, concebida esta actividad como quienes recaban, generan, procesan, editan, comentan, opinan, difunden, publican o proveen información a través de cualquier medio de difusión y comunicación, ya sea de manera eventual o permanente, lo que incluye a los comunicadores, a los medios de comunicación y sus instalaciones, y a sus trabajadores[31], de ahí que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establezca una protección integral y detallada de la libertad de expresión en los artículos 6 y 7.

58. Por tanto, el ejercicio del periodismo debe atenderse a la luz de los parámetros de protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, y *a contrario sensu*, realizar un análisis respecto de las obligaciones que la propia Constitución prevé para las autoridades gubernamentales como son promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

59. La importancia del derecho de la libertad de expresión que tienen las y los periodistas destaca en el desarrollo de la democracia en virtud de que la ciudadanía puede buscar, recibir y difundir información, y plantear interponer sus ideas por cualquier medio de difusión sin limitación de fronteras, sea individual o colectivamente[32]

60. En ese sentido, y atendiendo a que la autoridad responsable **L. C. ALEJANDRO TELLO CRISTERNA,** Gobernador Constitucional de esta entidad, al rendir su informe hizo el señalamiento de que las opiniones vertidas en el mes de (...), se encuentran amparadas también en el derecho que le asiste a la libertad de expresión. Es decir, este Organismo advierte que, para el ejercicio periodístico es fundamental el derecho de la libertad de expresión y que a quien se le atribuye violación a este derecho, se ampara bajo el cobijo del mismo. Por tal motivo, es necesario, previo al desarrollo del contexto de los hechos, advertir los límites que el derecho a la libertad de expresión tiene, pues como todos los derechos, no es absoluto.

61. Así, los límites del derecho a la libertad de expresión se encuentran el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública, por lo que la publicación o manifestación de las ideas u opiniones no es ilimitada e implica que, si bien la libre comunicación de pensamientos y opiniones es una garantía constitucional, quien realice ese tipo de actividades o las relacionadas, debe responder cuando se contravenga el respeto a la vida, a la moral y a la paz pública. Así lo estableció el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia siguiente

> "**LIBERTAD DE EXPRESIÓN. SUS LÍMITES.** El **primer párrafo del artículo 7o. de la Constitución Federal** establece que "Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni exigir fianza a los autores o impresores, ni coartar la libertad de imprenta"; esto es, la prohibición de la censura previa implica que el Estado no puede someter las actividades expresivas o comunicativas de los particulares a la necesidad de solicitar previamente un permiso a la autoridad que, por razones de contenido, tenga el poder de impedir su desarrollo. Sin embargo, la prohibición de la censura no significa que la libertad de expresión no tenga límites, o que el

[31] Informe Especial sobre la Situación de la Libertad de Expresión en México, junio 2018, así lo señalaron los Relatores Especiales para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de las Naciones Unidas sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión sobre su misión a México.
[32] Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, "Directrices para la observación de manifestaciones y protestas sociales", 2 de diciembre de 2016, p. 14.

> legislador no esté legitimado para emitir normas sobre el modo de su ejercicio. Lo anterior significa que estos límites no pueden hacerse valer mediante un mecanismo por el cual una autoridad excluya sin más la entrada de un determinado mensaje al debate público por estar en desacuerdo con su contenido, sino a través de la atribución de responsabilidades -civiles, penales, administrativas- posteriores a la difusión del mensaje; además, el indicado artículo 7o. constitucional evidencia con claridad la intención de contener dentro de parámetros estrictos las limitaciones a la libertad de expresión al establecer que ésta **"...no tiene más límites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. En ningún caso podrá secuestrarse la imprenta** como instrumento de delito.". Por su parte, el **artículo 6o. constitucional** destaca la imposibilidad de someter la manifestación de las ideas a inquisiciones de los poderes públicos al señalar que "La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa", a excepción de aquellos casos en que se ataque la moral, los derechos de tercero, se provoque algún delito o se perturbe el orden público. Se trata, por tanto, de límites tasados y directamente especificados en la Constitución Federal."[33]

62. Este Organismo advierte que, en el presente caso, se actualiza un sistema dual de protección del derecho a la libertad de expresión y sus límites. Así, debemos tomar en cuenta que las partes a quienes les asiste este derecho, corresponden, por un lado, a una persona que ejerce el periodismo y, por otro, al máximo mandatario del Estado de Zacatecas.

63. Sin embargo, los límites hacia la crítica se encuentran más amplios cuando ésta se refiere a personas que, por dedicarse a actividades públicas **o por el rol que desempeñan en una sociedad democrática**, están expuestas a un control más riguroso de sus actividades y manifestaciones que aquellos particulares sin proyección pública alguna, pues en un sistema inspirado en los valores democráticos, la sujeción a esa crítica es inseparable de todo cargo de relevancia pública.

64. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos precisó, en los casos Herrera Ulloa vs. Costa Rica[34] y Kimel vs. Argentina, que el acento de este umbral diferente de protección no se asienta en la calidad del sujeto, **sino en el carácter de interés público que conllevan las actividades o actuaciones de una persona determinada**. Esta aclaración es fundamental en tanto que las personas no estarán sometidas a un mayor escrutinio de la sociedad en su honor o privacidad durante todas sus vidas, sino que dicho umbral de tolerancia deberá ser mayor solamente mientras realicen funciones públicas o estén involucradas en temas de relevancia pública.

65. En la primera de las sentencias de referencia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que, el umbral de tolerancia es diferente del que ampara al ciudadano que no ha asumido la condición y la responsabilidad de quien tiene un cargo público y que por eso mismo tiene determinados deberes --éticos, pero también jurídicos-- frente a la sociedad a la que sirve o al Estado que gestiona los intereses de la sociedad.

66. También la Corte ha señalado que en una sociedad democrática los funcionarios públicos están más expuestos al escrutinio y la crítica del público[35]. Este diferente umbral de protección se explica porque se han expuesto voluntariamente a un escrutinio más exigente. Sus actividades salen del dominio de la esfera privada para insertarse en la esfera del debate público[36]. Este umbral no se asienta en la calidad del sujeto, sino en el interés público de las actividades que realiza[37].

67. Por tanto, no puede perderse de vista que en el presente caso se trata justamente del máximo representante del Estado de Zacatecas y que como tal, además de que, como lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por su encargo, el umbral de tolerancia con el que cuenta es diferente al que le

---

[33] **Registro digital:** 172476, **Instancia:** Pleno, **Novena Época, Materia(s):** Constitucional, **Tesis:** P./J. 26/2007, **Fuente:** Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Mayo de 2007, página 1523, **Tipo:** Jurisprudencia
[34] Párrafo 129
[35] Cfr. Caso Herrera Ulloa, supra nota 12, párr. 129, y Caso Ricardo Canese, supra nota 44, párr. 103.
[36] Ídem
[37] Ibídem

asiste a la quejosa, además que a éste, al **L. C. ALEJANDRO TELLO CRISTERNA,** Gobernador del Estado, le ciñe el mandamiento constitucional de respetar los límites que tiene el derecho a la libertad de expresión, como es la vida privada, la moral y la paz pública, así como la obligación, también enmarcada en la Constitución federal de promover, **respetar**, proteger y garantizar los derechos humanos.

68. Ahora bien, la quejosa presentó diversos audios, que contienen la entrevista referida, en la cual se desprende que, en dicha entrevista, el Gobernador del Estado manifestó que (...), empresa en la que labora **VD**, le exige un convenio por (…), enfatizando que, toda vez que él se ha negado a ello, la periodista **VD**, *(...).* Asimismo, señala que dichas críticas sólo son un medio para (…).

69. En confronta de las versiones expuestas por las partes -la conductora **VD** y el **L. C. ALEJANDRO TELLO CRISTERNA**, Gobernador del Estado-, con las pruebas aportadas por la quejosa, esta Comisión advierte que, contrario a lo señalado por el **L. C. ALEJANDRO TELLO CRISTERNA**, el derecho a la libertad de expresión al que alude, se encuentra regulado bajo un esquema diferenciado a la de toda aquella persona que no ejerce un cargo público. Toda vez que, precisamente, aludiendo a su calidad de funcionario público, el de mayor jerarquía dentro del poder ejecutivo estatal, éste tiene una posición de garante, respecto a las y los periodistas de la entidad, lo que se traduce en un deber de no interferir directa o indirectamente en los derechos de quienes pretenden contribuir a la deliberación pública mediante la expresión y difusión de su pensamiento. Aunado a que, como lo ha señalado la Corte Interamericana, las y los funcionarios, deben mostrar mayor flexibilidad a las críticas y discursos que cuestionan sus actividades gubernamentales, al haberse expuesto voluntariamente al escrutinio público. Pues, este aspecto, es determinante para consolidar una sociedad democrática.

70. Bajo este estándar, podemos concluir que, toda autoridad estatal, incluido el Gobernador del Estado, tienen prohibido pronunciar discursos que propicien, acentúen o exacerben situaciones de hostilidad, intolerancia o animadversión hacia las personas vinculadas con cualquier medio de comunicación, especialmente, de aquéllos que son contrarios a la opinión oficial. Acciones que se traducen en una vulneración directa al derecho a la libertad de expresión de las personas que ejercen el periodismo, al ser incompatibles con la obligación estatal de garantizar los derechos de esas personas, a la integridad personal y a la libertad de buscar, recibir y difundir información, al intimidar a quienes se encuentran vinculados con esos medios de comunicación. En adición, como ha quedado establecido en párrafos precedentes, las autoridades estatales pueden, excepcionalmente, restringir la libertad de expresión, bajo ciertas condiciones estrictas.

71. Es decir, el Estado, no puede evocar cualquier razón o motivación para censurar las expresiones y opiniones contrarias o inaceptables por los gobiernos o determinados actores, por existir en ellas un objetivo ilegítimo, que es constreñir la pluralidad democrática. En este sentido, se actualizará una violación a la libertad de expresión de las personas que ejercen el periodismo, cuando éstas reciban una agresión física, psicológica o de cualquier otra índole, debido a sus opiniones o información que se ha publicado en un medio de comunicación. Es decir, que dicha agresión debe estar vinculado directamente con su trabajo periodístico.

72. Con base en lo anterior, esta Comisión advierte que, durante la transmisión de la entrevista radiofónica y cuyo contenido fue ofrecido por ambas partes como prueba, se advierte que, efectivamente, el Gobernador del Estado, emitió un mensaje verbal, dirigido hacia la conductora **VD**, con el objetivo de que ésta cesara las críticas a las que, él mismo refiere, recibió su gobierno. Asimismo, la acusó de emitir dichas notas, como estrategia para obtener un convenio publicitario que califico de *(...).* Lo que se traduce en un cuestionamiento directo respecto al trabajo profesional y ético de la agraviada, difundido a través de un medio masivo de comunicación, y que busca influenciar en el trabajo, sentido editorial o línea informativa de la periodista.

73. Tenemos entonces que, durante la transmisión de la entrevista radiofónica en comento, el **L.C. ALEJANDRO TELLO CRISTERNA**, en su calidad de Gobernados del Estado,

afirmó:

- ***[...]***

Lo destacado es de esta Comisión.

74. Expresiones de las que se advierten los siguientes aspectos: en primer lugar, que contrario a lo manifestado por el Gobernador del Estado, éste sí señaló de manera directa que la conductora **VD**, le exige (...), a cambio de terminar con las críticas que ésta realiza en ejercicio de su labor periodística. En segundo lugar, afirma que, el ejercicio periodístico de **VD**, tiene como objetivo (…). Finalmente, en tercer lugar, esta Comisión advierte que, el **L. C. ALEJANDRO TELLO CRISTERNA**, se valió de un medio de comunicación público, para hacer señalamientos al trabajo periodístico de la agraviada, al afirmar que sus opiniones y expresiones son infundadas, falsas, y con él ánimo de (…).

75. Si bien, estos actos no constituyen una censura directa a la labor periodística de **VD,** si se configuran como una incidencia indirecta sobre ella, al desprenderse de éstas que, toda vez que la línea editorial o informativa del medio de comunicación en el que se desempeña, no coincide con la institucional, se cuestiona el profesionalismo de su trabajo, al afirmar que éste tiene como mero objetivo (…), lo que, evidentemente, podría repercutir en la credibilidad que se le otorga a éste por parte de la ciudadanía.

76. Al respecto, no debemos olvidar que, las expresiones concernientes a la idoneidad de una persona para el desempeño de un cargo público o a los actos realizados por los funcionarios en ejercicio de sus labores, gozan de la protección, de manera tal que se propicie el debate democrático en los Estados. De ahí que éstos, deban tener presente que están más expuestos al escrutinio y la crítica del público, y que dicha exposición ha sido voluntaria. Por lo que, el umbral de protección del que gozan es diferente al de cualquier persona que no ejerce cargo alguno, ya que sus actividades salen de la esfera privada para insertarse en la esfera del debate público, al tratarse de temas de interés público. Por lo que, bajo ninguna circunstancia, pueda justificarse que un funcionario público, haga uso de un medio de comunicación oficial, para afirmar que, las opiniones externadas por la periodista **VD,** están desprovistas de fundamento, bajo el único argumento de que tiene como finalidad (…).

77. Esto es así, porque el **L. C. ALEJANDRO TELLO CRISTERNA**, en su calidad de Gobernador del Estado, tiene la obligación constitucional y convencional de tolerar las críticas realizadas a su gestión, y garantizar la libertad de expresión, dado el interés democrático existente en torno a sus acciones y decisiones. Lo que, necesariamente, se traduce en el deber de abstenerse de intimidar a cualquier periodista que lo critique por ello.

78. Finalmente, se hace necesario establecer por qué este Organismo arribó a la conclusión de que, en las expresiones efectuadas por el Gobernador del Estado, estaban dirigidas al quehacer de la conductora y periodista **VD**, pues al remitirnos a la literalidad de la entrevista, vincula a “(…)” de (...), como quién le pide (...) y que diario le cuestiona (…), para enseguida responder dirigiéndose a “(…)” “(…)”, es decir, era un mensaje dirigido a ella, no a la televisora que representa. Luego afirma que (…), respondiendo, “(…)”. Concluye la entrevista haciendo alusión nuevamente al cuestionamiento que afirma recibía diario (…) Y su respuesta, en esta ocasión fue “(…)”. Con lo cual queda claro que, tal como lo refiere la ahora víctima de vulneración a sus derechos humanos **VD**, la estaba acusando de forma directa de (…).

79. Por tanto, se tiene por cierto que el Gobernador del Estado **ALEJANDRO TELLO CRISTERNA**, expuso la imagen y datos personales de **VD**, pues faltó a su deber de tratar confidencialmente tales datos, conforme se lo exige la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Zacatecas, ya que utilizó el nombre de la víctima y lo relacionó directamente con su fuente de empleo, todo esto sin el consentimiento de ella, como única titular de esos derechos, datos con las cuales la persona –**VD**- era susceptible de ser identificada o identificable, propiciando injerencias de terceras personas en su vida personal y profesional.

80. Por otro lado, este Organismo no soslaya que la quejosa **VD** hizo referencia que, después de la entrevista, aproximadamente 8 días posteriores, su imagen fue publicada en un espectacular, por ambas caras, en la que se fijó una fotografía, (...), en la cual se insertó el siguiente texto: "*(...)*", lo cual refiere como coincidente y, por tanto, atribuible al Gobernador del Estado.

81. Para acreditar u obtener información al respecto, el 21 de febrero de 2019, personal de esta Comisión de Derechos Humanos acudió al lugar donde se encuentra la estructura del citado espectacular, con la finalidad de recabar información sobre la persona que solicitó la renta de éste; por lo que, tal y como se asentó en el acta de dicha diligencia, una vez que se entrevistaron a varios locatarios de la plaza comercial, se logró obtener el número telefónico del Contador […], persona encargada de dicha plaza; por lo que, a fin de obtener más información, se marcó al número proporcionado, informando el entrevistado que él solamente se dedica a la renta de los locales comerciales, no del espectacular.

82. Luego, el 27 de febrero de 2019, personal de este Organismo logró entrevistarse nuevamente, vía telefónica, con el Contador […], quien proporcionó un número telefónico, afirmando que pertenece a la persona encargada de la renta del espectacular; sin embargo, el 01 de marzo de 2019, personal de este Organismo intentó comunicarse al número telefónico proporcionado, en el cual una grabación afirmó que ese número no existe.

83. En ese contexto, se concluye que las evidencias con las que cuenta esta Comisión de Derechos Humanos no son suficientes para vincular la exposición de la imagen de **VD**, en un espectacular a ambas caras, con alguna acción emprendida por el **L. C. ALEJANDRO TELLO CRISTERNA**, Gobernador del Estado de Zacatecas, aún y cuando, como ella misma lo refiere, a escasos días de la entrevista radiofónica, se publicó su imagen, con un contenido similar. Cuestión que ella misma afirmó no tener la certeza de que tal acción haya emanado del personal del Gobierno del Estado.

VII. CONCLUSIONES DEL CASO.

Luego de hacer un estudio holístico de la evidencia recabada, los hechos probados y considerando los estándares señalados en el apartado anterior, esta Comisión concluye que en el presente caso lo siguiente:

1. Se acreditó que el Gobernador Constitucional de Zacatecas, vulneró los derechos humanos de **VD**, respecto a la libertad de expresión, en relación con su labor periodística, así como el derecho al honor y a la propia imagen.

2. Lo anterior, en virtud de que, mediante una entrevista de radio, expuso públicamente el nombre de la aquí víctima, relacionándola de forma directa con la televisora para la que trabaja y en la cual desarrolla su ejercicio periodístico. En la referida entrevista, realizó descalificaciones al ejercicio de la función periodística, al exponerla como (...).

VIII. REPARACIONES.

1. De conformidad con lo establecido en los artículos 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 51 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, al acreditarse violación a los derechos humanos de **VD**, atribuible al Gobernador del Estado de Zacatecas, la Recomendación formulada al respecto, debe incluir las medidas que procedan para lograr la efectiva restitución de la quejosa afectada en sus derechos.

2. Dicha reparación, de conformidad con los Principios y Directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 2005, las violaciones de derechos humanos deben

contemplar, de forma apropiada y proporcional a la gravedad de ésta, una reparación plena y efectiva en las formas siguientes: restitución, rehabilitación, satisfacción, indemnización, deber de investigar y garantías de no repetición. Las reparaciones se encuentran también en la Ley General de Víctimas, en sus artículos 1, último párrafo, 7, fracción I y II, y particularmente en el texto legal del artículo 26, que establece que "Las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera oportuna, plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva por el daño que han sufrido como consecuencia del delito o hecho victimizante que las ha afectado o de las violaciones de derechos humanos que han sufrido, comprendiendo medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y medidas de no repetición"; además, por lo previsto en el artículo 27 del mismo ordenamiento legal.

Modalidades de la reparación del daño. La reparación del daño comprende diversas modalidades en las que se puede materializar:

A) De la indemnización.

1. La indemnización es una medida compensatoria que busca reparar los perjuicios económicamente evaluables que sean consecuencia de las violaciones a derechos humanos, entre los que se incluyen: el daño físico o mental; la pérdida de oportunidades, en particular las de empleo, educación y prestaciones sociales; los daños materiales y la pérdida de ingresos, incluido el lucro cesante; los perjuicios morales; los gastos de asistencia jurídica o de expertos, medicamentos y servicios médicos, psicológicos y sociales[38].

2. En razón a lo anterior, en términos de los artículos 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 26, 27, 40, 41, 42, 54, 58, 59, y demás aplicables de la Ley de Atención a Víctimas del Estado de Zacatecas, y toda vez que se acreditaron violaciones a los derechos humanos de **VD,** la Comisión Ejecutiva de Atención Integral a Víctimas del Estado, deberá realizar su inscripción, en su calidad de víctima directa, en el Registro Estatal de Víctimas, a fin de que tenga acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral previsto en dicha Ley.

B) De las medidas de rehabilitación.

1. Las medidas de rehabilitación buscan reducir los padecimientos físicos y psicológicos de las víctimas, a través del otorgamiento de servicios de atención médica, psicológica, jurídica y social que éstas requieran[39].

2. En ese sentido, según la violación a derechos humanos acreditada en el presente instrumento, se deberá valorar y determinar si **VD**, como víctima directa, requiere de atención psicológica especializada, derivado de las posibles afectaciones presentadas a raíz de los hechos materia de la presente Recomendación. Y, de ser el caso, y si así lo decidiera la agraviada, se realice el tratamiento psicológico necesario para su total restablecimiento. Asimismo, a fin de evitar que ésta sea objeto de una revictimización, debe garantizarse que dicho tratamiento sea especializado y que considere las características de edad y género de la víctima.

C) De las medidas de satisfacción.

1. Respecto a este concepto, de conformidad con lo establecido por los Principios sobre el derecho a obtener reparaciones, ésta debe incluir, cuando sea el caso, la totalidad o parte de las medidas siguientes: medidas eficaces para conseguir que no se continúe con las violaciones; así como la aplicación de sanciones judiciales o administrativas a los responsables de las violaciones.[40]

2. Por lo cual, el Gobernador Constitucional del Estado, **L. C. ALEJANDRO TELLO**

---

38. Numeral 20 de los *Principios y Directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones,* Asamblea General de las Naciones Unidas, 16 de diciembre de 2005.
39. Ibíd., Numeral 21.
40 Ibídem, párr. 22.

CRISTERNA, deberá emitir una disculpa pública, con el compromiso ético y jurídico de desempeñar sus funciones en un marco de respeto a los derechos humanos, especialmente de respetar el derecho a la libertad de expresión de las personas que ejercen el periodismo, con el objetivo de evitar cualquier transgresión como la que se acreditó en la presente Recomendación.

D) De las garantías de no repetición.
1. Son aquellas que se adaptan con el fin de evitar que las víctimas vuelvan a hacer objeto de violaciones a sus derechos humanos y para contribuir a prevenir o evitar la repetición de actos de su misma naturaleza.

2. Asimismo el Gobernador Constitucional del Estado, **L. C. ALEJANDRO TELLO CRISTERNA**, deberá de capacitarse en el derecho a la libertad de expresión, en relación con el ejercicio periodístico, así como en el derecho al honor y a la imagen.

IX. RECOMENDACIONES.

Por lo anterior, y con fundamento en los 1 y 102 apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 2, 3, 4, 8, 17, 37, 51, 53, 54, 56, 57 y 58 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas se emiten las siguientes Recomendaciones:

PRIMERA. En el plazo máximo de un mes, contado a partir de la notificación de la presente Recomendación, se inscriba en el Registro Estatal de Víctimas a **VD**, como víctima directa de violación de derechos humanos, a fin de que, tenga acceso oportuno y efectivo al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, conforme a la Ley de Atención a Víctimas del Estado de Zacatecas.

SEGUNDA. Dentro del plazo máximo de un mes, contado a partir de la notificación de esta Recomendación, se valore y determine si la víctima directa requiere de atención psicológica, relacionada con la vulneración a sus derechos humanos. Y, de ser el caso, y así lo decida la agraviada, en un plazo de un mes, posteriores a la realización de dicha valoración, se realicen las gestiones necesarias para que se inicie su tratamiento, hasta el total restablecimiento de su salud mental.

TERCERA. Dentro del plazo máximo de un mes, contados a partir de la aceptación de esta Recomendación, se emita por parte del Gobernador Constitucional del Estado, **L. C. ALEJANDRO TELLO CRISTERNA**, una disculpa pública, en la que asuma el compromiso ético y jurídico de desempeñar sus funciones dentro del marco de respeto a los derechos humanos, con el objetivo de evitar cualquier transgresión como la que se acreditó en la presente Recomendación, es decir, en el ámbito de los derechos de la libertad de expresión, en relación con el ejercicio periodístico, el derecho al honor y derecho a la propia imagen.

CUARTA. Dentro de un plazo máximo de un mes, contados a partir de la aceptación de la presente Recomendación, se capacite al Gobernador Constitucional del Estado, **L.C. ALEJANDRO TELLO CRISTERNA**, en temas relativos a la protección y respeto a los derechos humanos, específicamente en lo que se refiere al derecho a la libertad de expresión, en relación con el ejercicio periodístico, el derecho al honor y el derecho a la propia imagen.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 53, párrafo segundo de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, se hace del conocimiento de la autoridad a la que va dirigida esta Recomendación, que dispone de un plazo de 15 días

hábiles, contados a partir del día siguiente en que ésta se le notifique, para que manifieste si la acepta o no, en el entendido de no aceptarla, su respuesta se hará del conocimiento de la opinión pública. En caso de que la acepte, se le notifica que dispone de un plazo de 15 días, contados a partir del vencimiento del término del que disponía para responder sobre la aceptación, a fin de enviar las pruebas de su cumplimiento.

Por último, hágasele saber a la quejosa que, de conformidad con el artículo 61 de la Ley de este Organismo, dispone de 30 días naturales, computados a partir de la fecha de notificación del presente documento, para que en caso de que exista inconformidad con la misma, interponga el recurso de impugnación correspondiente ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Así lo determina y firma

DRA. EN D. MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOS
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO

c.c.p. Licenciado Valente Cabrera Hernández, Titular de la Comisión Ejecutiva de Atención Integral a Víctimas de Zacatecas. Para su conocimiento e inicio del expediente correspondiente.
c.c.p. Dra. en D. H. Argelia Alejandra Rodríguez Ayala, Coordinadora General de Asuntos Jurídicos, para su conocimiento.
c.c.p. Minutario.

Expediente: CDHEZ/479/2019

Persona quejosa: Q1+.

Personas agraviadas: A1, **A2** y **A3**.

Autoridades responsables:
a) Elementos de la Policía Estatal Preventiva, de la Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas.
b) Elementos de Seguridad Pública Municipal de Valparaíso, Zacatecas.
c) Presidente Municipal de Valparaíso, Zacatecas.

Derechos Humanos vulnerados:
I. Derecho a la integridad y seguridad personal, en relación al derecho a no ser objeto de tortura.
II. Derecho a la integridad y seguridad personal, en relación al derecho a no ser objeto de tratos crueles, inhumanos o degradantes.
III. Derecho a la legalidad y seguridad jurídica, en relación al derecho a no ser objeto de detenciones arbitrarias.
IV. Derecho de acceso a la justicia, en relación al debido proceso y a la verdad.

Zacatecas, Zacatecas, a 06 de diciembre de 2021, una vez concluida la investigación de los hechos que motivaron el expediente **CDHEZ/479/2019,** y analizado el proyecto presentado por la Cuarta Visitaduría, la suscrita aprobó, de conformidad con los artículos 4, 8 fracción VIII, 17 fracción V, 37, 51, 53 y 56 de la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, en relación con lo dispuesto por los numerales 27, fracción VIII, 40 fracción V, 161 fracción X, 166, 167 y 168 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, la **Recomendación 51/2021** que se dirige a las autoridades siguientes:

GENERAL ADOLFO MARÍN MARÍN, Secretario de Seguridad Pública de Zacatecas, en relación a los hechos atribuibles a los elementos de la Policía Estatal Preventiva, cometidos durante el periodo del **MAESTRO ISMAEL CAMBEROS HERNÁNDEZ**, al frente de dicha Secretaría.

H. LXIV LEGISLATURA DEL ESTADO DE ZACATECAS, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 39 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, por lo que hace a los hechos cometidos por **PM1**, Presidente Municipal de Valparaíso, Zacatecas.

DOCTOR ELEUTERIO RAMOS LEAL, Presidente Municipal de Valparaíso, Zacatecas, en relación a los hechos atribuibles a los elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

R E S U L T A N D O:

I. DE LA CONFIDENCIALIDAD.

1. De conformidad con los artículos 6°, apartado A, fracción II y 16, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 23 y 85 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, los datos personales de los peticionarios y los agraviados, relacionado con esta resolución, permanecerán confidenciales, ya que éstos no son públicos.

2. Asimismo, en términos de lo dispuesto por los artículos 4°, párrafo sexto, 6° fracción II, y 16 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 16 de la Convención de los Derechos del Niño, los nombres, apellidos y demás datos personales de niñas y niños vinculados con los hechos de la presente resolución, se mantienen bajo la misma estricta confidencialidad, en pleno respeto a su derecho a la intimidad y vida privada.

II. RELATORÍA DE LOS HECHOS Y OBJETO DE LA CONTROVERSIA.

1. El 02 de octubre de 2019, personal de este Organismo recabó comparecencia de queja a **Q1+**, a favor de **A1, A2** y **A3**, personas privadas de la libertad en el Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas, por actos que atribuyó a elementos de la Policía Estatal Preventiva, de la Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas, así como a elementos de Seguridad Pública municipal de Valparaíso, Zacatecas; lo anterior, de conformidad con los artículos 30, 31 y 32 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas.

Por razón de turno, el 02 de octubre de 2019, se remitió el escrito de queja a la Cuarta Visitaduría, bajo el número de expediente citado al rubro, a efecto de formular el correspondiente acuerdo de calificación, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 123 y 124 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas.

El 04 de octubre de 2019, la queja se calificó como una probable violación al derecho a la integridad y seguridad personal, en relación al derecho a no ser objeto de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, además al derecho a la legalidad y seguridad jurídica, en relación al derecho a no ser objeto de detenciones arbitrarias; lo anterior, de conformidad con el artículo 124, fracción I, del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas.

2. Los hechos materia de la queja consistieron en lo siguiente:
Q1+ señaló que, el 02 de octubre de 2019, fueron detenidos **A1, A2** y **A3**, por parte de elementos de la Policía Estatal Preventiva, de la Secretaría de Seguridad Pública, en la Comunidad de […]. Asimismo, manifestó que, posteriormente a su detención, se suscitó un enfrentamiento armado, en donde hubo personas fallecidas, encontrándose ya **A1**, **A2** y **A3**, en la caja de una patrulla de la referida corporación, lugar en el que fueron golpeados por parte de los elementos de la Policía Estatal Preventiva.

3. Las autoridades involucradas rindieron los informes correspondientes:
El 15 de octubre de 2019, el **DPEP1**, otrora Director de la Policía Estatal Preventiva, de la Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas, remitió su informe de autoridad.

El 18 de octubre de 2019, el **PM1,** Presidente Municipal de Valparaíso, Zacatecas, rindió su informe de autoridad.

III. COMPETENCIA.

1. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas es competente, en los términos de los artículos 1º, 4º, 6º, 8º fracción VII, inciso A) y 31 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, en relación con el numeral 15, del Reglamento Interno, en razón de que la queja se promueve en contra de servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas, así como del H. Ayuntamiento de Valparaíso, Zacatecas.

2. De conformidad con los artículos 123 y 124, fracción I del Reglamento Interior de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, este Organismo advierte que, los hechos narrados constituyeron una presunta violación a los derechos humanos de **A1, A2** y **A3**, así como una presunta responsabilidad por parte de los servidores públicos señalados.

3. Esta Comisión presumió la violación de los siguientes derechos:

a) Derecho a la integridad y seguridad personal, en relación al derecho a no ser objeto de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes.
b) Derecho a la legalidad y seguridad jurídica, en relación al derecho a no ser objeto de detenciones arbitrarias.

IV. PROCEDIMIENTO ANTE LA COMISIÓN.

Con la finalidad de documentar las presuntas violaciones a derechos humanos, así como para determinar la existencia o no de responsabilidad por parte de los servidores públicos señalados, este Organismo realizó entrevistas a las personas relacionadas con los hechos, a personas privadas de la libertad, a testigos, a elementos de la Policía Estatal Preventiva, a elementos de la Dirección de Policía de Seguridad Vial, y a elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Valparaíso, Zacatecas. Asimismo, se solicitaron informes de autoridad y en vía de colaboración. De igual forma, se realizó inspección de campo, se recibieron informes de autoridad y en vía de colaboración, se recibieron copias de la causa penal, así como de la carpeta de investigación relacionados con los hechos; además, se realizaron los correspondientes protocolos de Estambul de las personas agraviadas.

V. PRUEBAS.

Con base en lo estipulado en los artículos 48 y 49 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, en relación con los numerales 64 y 65 del Reglamento Interior de este Organismo, durante el procedimiento realizado por esta Institución, se recabaron los elementos probatorios documentales, remitidos tanto por los agraviados como por las autoridades señaladas como responsables, así como de las declaraciones necesarias para emitir la resolución correspondiente.

VI. CONSIDERACIÓN PREVIA.

Respecto de los hechos atribuibles a personal de la Dirección de Seguridad Pública municipal de Valparaíso, Zacatecas.

1. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, es un organismo público autónomo que, de acuerdo al artículo 2 de la Ley que rige su actuación, protege y defiende, en el Estado de Zacatecas, que todas las personas gocen de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales de los cuales el Estado Mexicano sea parte, así como de los señalados en la Constitución local y las leyes que de ella emanan.

2. Asimismo, el propio artículo 2, en su párrafo segundo, señala que las autoridades en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar en los términos que establezca esta ley. Con lo cual, es obligación de todos los servidores públicos promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.

3. Misma obligación que es conferida por el artículo 1, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al señalar que: "*Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad*".

4. Desde esta perspectiva, todas las autoridades que conforman al Estado Mexicano, tienen el deber ineludible no sólo de promover, respetar, proteger y cumplir con los derechos humanos que constituyen el parámetro de regularidad constitucional en nuestro país, sino también, están obligados a protegerlos. Es decir, todas las autoridades estatales deben evitar posibles violaciones a derechos humanos, para lo cual, desplegarán las acciones necesarias para prevenir que, tanto las autoridades como los particulares, interfieran en el ejercicio de éstos. Acciones entre las que se encuentran el deber de adoptar las medidas necesarias para investigar, sancionar y reparar las violaciones comedidas en perjuicio de aquéllos. Surge así, la obligación a cargo de las autoridades estatales, consistente en colaborar con los organismos jurisdiccionales y no jurisdiccionales, encargados de investigar presuntas violaciones a derechos humanos.

5. Obligación que, en el caso específico de esta entidad federativa, se encuentra prevista en los artículos 39 y 45 de la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, en el que se establece que las autoridades señaladas como responsables rendirán un informe sobre los actos, omisiones o resoluciones que se les atribuyan. Mismo que deberá ser contestado por escrito, y estar acompañado de los elementos de información que se consideren necesarios para justificar o bien, desacreditar los actos u omisiones que se les imputan.

6. En este sentido, y toda vez que **A1, A2** y **A3** manifestaron en sus comparecencias de queja, de fechas 2 y 8 de octubre de 2019, que en los hechos señalados por ellos como presuntamente violatorios de sus derechos humanos, participaron elementos de la Dirección de Seguridad Pública del municipio de Valparaíso, Zacatecas, esta Comisión le solicitó el informe de autoridad correspondiente al **PM1**, Presidente de dicho municipio, mismo que fue recibido en fecha 10 de octubre de 2019. Sin embargo, a través de informe recibido en fecha 18 de octubre de 2019, éste refirió que, la única participación que tuvieron los elementos de la Dirección de Seguridad Pública del municipio de Valparaíso, consistió en atender un reporte anónimo realizado al 911, recibido a las 14:45 horas, del 01 de octubre de 2019, en el que informaban la presencia de detonaciones de arma de fuego rumbo a la comunidad de […], acudiendo el **DSP1** y el grupo “P” a cargo del **CDSP1,** a atenderlo, en las patrullas123 y 119, y que posteriormente, el Director de Seguridad Pública solicitó el apoyo de protección civil con una ambulancia, trasladándose la unidad 124. La cual, finalmente, brindó apoyo para trasladar a una persona al municipio de Fresnillo. Es decir, niega la participación de los elementos en los hechos, afirmando que éstos únicamente acudieron a brindar auxilio y resguardo, haciendo énfasis en que, cuando sus elementos arribaron al lugar, los hechos materia de la presente Recomendación ya habían ocurrido. Anexando como prueba unas hojas manuscritas, que afirma corresponde al libro de registro de las actividades realizadas por los elementos de la Dirección de Seguridad Pública municipal. Lo anterior, a pesar de que, de manera específica, **A2** afirmó que el **DSP1,** Director de Seguridad Pública de dicho municipio, se encontraba en el lugar de los hechos, señaló que ellos (los agraviados), eran sicarios y traían consigo armas y drogas, refiriendo incluso que lo golpeó.

7. No obstante lo anterior, este Organismo advirtió que, del contenido de las declaraciones de **PEP5, PEP4, PEP14, PEP10, PEP7, PEP9, PEP8, PEP13, PEP12, PEP26, PEP16, PEP18, PEP19, PEP24** y **PEP20**, todos elementos de la Policía Estatal Preventiva, de la Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas, se desprende que éstos son coincidentes al señalar que, en el operativo que llevaron a cabo, intervinieron los elementos de la Dirección de Seguridad Pública municipal de Valparaíso, Zacatecas, ya que salieron juntos, en convoy, de las instalaciones de esta corporación, dirigiéndose a la Comunidad de El […], de ese municipio, lugar en donde se llevaron a cabo los hechos que nos ocupan. De manera específica, **PEP3, PEP4, PEP5, PEP9, PEP10, PEP13, PEP14, PEP19, PEP24** y **PEP26** aseveraron, de manera coincidente, que el convoy fue encabezado, en un primer momento, por patrullas de la policía municipal de Valparaíso, hasta que llegaron a una intersección, en donde **PEP1** se cambió de patrulla y se fue de punta.

8. Aunado a lo anterior, esta comisión constató que, a través de declaración rendida ante la autoridad ministerial, en la misma fecha de los hechos (01 de octubre de 2019), **PEP10, PEP16, PEP19, PEP18, PEP24,** todos elementos de la Policía Estatal Preventiva, que intervinieron directamente en los hechos, fueron coincidentes en señalar que, en el operativo que da origen al presente documento recomendatorio, tuvieron participación elementos de la

Dirección de Seguridad Pública del municipio de Valparaíso, Zacatecas. De manera específica, **PEP10** manifestó que el día de los hechos, **PEP1** los convocó a reunirse en el Centro de Valparaíso, específicamente en *la base de la policía municipal* que ahí se encuentra, a fin de informarles que saldrían en un operativo, de manera conjunta con la policía municipal. Motivo por el cual, asevera, se organizó un convoy conformado por 4 patrullas de la Policía Estatal y 2 patrullas de la policía municipal, mismas que se trasladaron de manera conjunta a la comunidad de […]. En concordancia, **PEP16** dijo que el día de los hechos, se constituyeron en las instalaciones de la policía municipal de Valparaíso, que se ubican en el centro, desde donde salieron, en compañía de otras tres patrullas de la Policía Estatal y dos más de la policía municipal, a atender varios reportes de robo y extorsión en la comunidad de […]. En el mismo sentido, **PEP18** señaló que el día de los hechos recibieron instrucciones de juntarse en el Centro de Valparaíso, lugar en donde se juntaron, además de la patrulla en la que él estaba asignado, otras 3 de la policía estatal y dos de la policía municipal, para salir rumbo a la comunidad de […]. Por su parte, **PEP19** refirió también, que **PEP1** les pidió que se constituyeran en el Centro de Valparaíso, para de ahí acudir a la comunidad de […], a atender diversos reportes; que, para tales fines, salieron 4 patrullas de la Policía Estatal, y dos de la policía municipal. Así, **PEP24** aseveró que el comandante **PEP1** los convocó al centro del referido municipio para, desde ahí, trasladarse hacia la comunidad de […], a atender varios reportes, especificando que, entre las patrullas que conformaron el convoy, se encontraban *dos patrullas de la policía municipal.*

9. En adición, el 19 de noviembre de 2019, **A2** presentó formal denuncia por los hechos materia de la presente Recomendación, en la que nuevamente afirmó que, el convoy se conformaba por 4 patrullas de la Policía Estatal y 2 de la policía municipal de Valparaíso; refiriendo incluso que, uno de los elementos que lo detuvo pertenecía a esta última corporación.

10. En virtud a lo anterior, al haberse obtenido una versión contradictoria a la señalada por el **PM1**, Presidente Municipal de Valparaíso, Zacatecas, esta Comisión consideró pertinente solicitarle un informe complementario en fecha 21 de febrero de 2020, del que se tuvo contestación el 10 de marzo de 2020, mediante el cual, el alcalde municipal, reiteró que la única participación de los elementos de la Dirección de Seguridad Pública municipal de Valparaíso, Zacatecas, consistió en brindar auxilio y resguardo de una persona lesionada. En adición, asevera que, los únicos elementos que participaron fueron los **CC. CDSP1** y **DSP1** (finado), aún y cuando en su primer informe señaló que se trasladaron al lugar de los hechos, en un primer momento, dos unidades y el “grupo P”, y posteriormente una tercera unidad.

11. Aunado a lo anterior, esta Comisión observa que, también la autoridad judicial citó a declarar a las 14:00 horas, del 09 de octubre de 2019, a **DSP** (finado), entonces Director de Seguridad Pública del municipio de Valparaíso, Zacatecas, dentro de la audiencia de vinculación a proceso, seguida en contra de los agraviados. Sin embargo, éste no dio cumplimiento a dicho citatorio, a pesar de haberlo recibido el mismo, en dicha fecha, toda vez que en el mencionado citatorio aparece la leyenda *“recibí”,* con fecha 09 de octubre de 2019, y el nombre de **DSP1.** En adición, de la cédula de notificación recabada, se advierte que, efectivamente, la Notificadora del Juzgado de Control de Valparaíso asentó que ésta se llevó a cabo el 09 de octubre de 2019, a las 13:25 horas, ante la presencia de **DSP1,** quien plasmó su firma. No obstante, dicho servidor público no atendió el mandamiento judicial, ya que, según obra en autos, la **SM1,** Síndica Municipal de Valparaíso, refiere que éste no se encontraba en el municipio, en razón a haber sido comisionado un día antes, para salir precisamente, el día 09 de octubre de 2019, a las 14:00 horas, a atender unas diligencias con una empresa denominada “[…]”.

12. Justificación que carece de algún soporte documental que de certidumbre de que, efectivamente, **DSP1** (finado), entonces Director de Seguridad Pública del municipio de Valparaíso, se encontraba materialmente imposibilitado para atender un mandamiento judicial, indispensable para garantizar el acceso a la verdad y el debido proceso de las víctimas, ya que se señaló que éste, así como elementos de seguridad pública a su cargo, tuvieron intervención en los hechos. Lo que denota la falta de voluntad de las autoridades municipales para garantizar el derecho de acceso a la justicia de los agraviados.

13. En adición, esta Comisión observa que, debido a la falta de comparecencia del Director de Seguridad Pública de Valparaíso, Zacatecas, el agente del Ministerio Público de la causa, le solicitó al **PM1**, Presidente Municipal de Valparaíso, Zacatecas, informara el nombre de los elementos de la policía preventiva que acudieron en apoyo a los hechos ocurridos el 01 de octubre de 2019. Sin que obre, dentro del expediente de la causa, constancia de la respuesta que otorgada.

14. Lo descrito en los párrafos precedentes, evidencia el incumplimiento por parte de las autoridades municipales de Valparaíso, Zacatecas, de coadyuvar con las autoridades encargadas de investigar presuntas violaciones a los derechos humanos, así como de aquéllas a cargo de la determinación de la comisión de posibles hechos clasificados como delitos, ya que, ni ante este Organismo, ni ante las autoridades ministerial y judicial, se proporcionó un informe acompañado de los elementos probatorios necesarios para crear certeza de su veracidad, en el que se hiciera constar la participación real que los elementos de dicha corporación tuvieron en los hechos materia de la presente Recomendación. Incluso, en los informes rendidos antes esta Comisión, y pese a que en un primer momento se afirmó la participación de diversos elementos de la Dirección de Seguridad Pública, a saber, de **DSP1,** del **CDSP1** y del “grupo P”, quienes acudieron en las patrullas 123 y 119, y que posteriormente, acudió también la de número económico 124, se aseveró, posteriormente, que sólo los primeros acudieron a brindar auxilio cuando lo solicitó la Policía Estatal. Lo anterior, como se ha hecho énfasis, sin que se proporcionara ningún elemento de prueba para desacreditar las afirmaciones de **A1** y **A2,** quienes, en reiteradas ocasiones, afirman que en sus detenciones participaron elementos de la Dirección de Seguridad Pública municipal de Valparaíso, Zacatecas, quienes iban a bordo de 2 patrullas de esa Dirección, en un operativo conjunto con la Policía Estatal Preventiva.

15. Versiones que, además, encuentran respaldo en las declaraciones de los elementos de la Policía Estatal descritas en párrafos precedentes. Las cuales, en algunos casos, fueron vertidas el mismo día de los hechos, y con una serie de detalles coincidentes que permite a esta Comisión arribar a la conclusión de que es factible presumir que, el 01 de octubre de 2019, el operativo en el que los agraviados refieren diversas vulneraciones a sus derechos humanos, pudo existir participación de, al menos, dos patrullas de la policía preventiva municipal de Valparaíso, Zacateca. Lo anterior, sin que sea posible determinar el número de elementos involucrados, ni la identidad de los mismos, debido a la resistencia de la autoridad municipal de dar cumplimiento a su obligación constitucional y convencional de coadyuvar en la investigación de violaciones a derechos humanos.

16. Así pues, esta Comisión advierte una evidente falta de colaboración por parte del **PM1**, Presidente Municipal de Valparaíso, Zacatecas, quien, al negar la participación de los elementos de la Dirección de Seguridad Pública a su cargo, no sólo entorpece la correcta integración del expediente, sino vulnera el derecho de acceso a la justicia de los agraviados, específicamente de sus derechos al debido proceso y a la verdad; ya que, además de que éste tiene la obligación de proporcionar información a las víctimas, a sus familiares, a este Organismo y a cualquier otra autoridad que se lo requiera, sobre las circunstancias en que se llevaron a cabo hechos en que se cometieron violaciones a derechos humanos, tiene el deber de coadyuvar en el desarrollo de un debido proceso. Es decir, las autoridades estatales tienen prohibido dificultar la investigación de los ilícitos atribuidos a los miembros de sus corporaciones, generándose en consecuencia, el deber de proporcionar toda aquella información que sea necesaria para esclarecer los hechos y, en su caso, sancionar a los responsables de violaciones a derechos humanos.

17. Esto es así, porque las actuaciones de las autoridades estatales se encuentran sometidas a los controles de otros poderes del Estado, que buscan garantizar que se respeten los derechos de todas las personas que se encuentran en nuestro país. De ahí que, negarse a proporcionar información o bien, como en el presente caso, negar la participación de los elementos de la Dirección de Seguridad Pública del municipio de Valparaíso, Zacatecas, sin aportar ningún indicio que haga suponer la veracidad de dicha afirmación, constituye una obstrucción a la justicia, ya que, dicha decisión incide directamente en la falta de esclarecimiento de los hechos y, en consecuencia, en el encubrimiento de posibles responsables de violaciones a derechos humanos.

18. En este sentido, esta Comisión arriba a la conclusión de que, en el presente caso, el **PM1**, Presidente Municipal de Valparaíso, Zacatecas, incumplió con la obligación general de garantizar los derechos humanos que forman parte del parámetro de regularidad constitucional de nuestro país, específicamente con el deber de coadyuvar en la investigación de violaciones de derechos humanos, ya que, a pesar de los múltiples indicios que demuestran la participación de los elementos de la Dirección de Seguridad Pública del municipio a su cargo en los presente hechos, éste se limitó a negar su participación en los hechos, y a negarse a proporcionar información que pudiera coadyuvar a que éste Organismo esclarezca las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se cometieron las múltiples violaciones a los derechos humanos de los agraviados. Siendo éste, uno de los deberes elementales de las autoridades estatales, para garantizar la tutela efectiva de los derechos fundamentales, toda vez que, el esclarecimiento de las circunstancias en las que ocurrieron los hechos que generan responsabilidad estatal, constituye un requisito indispensable para arribar al conocimiento de la verdad, así como para sancionar a los responsables de haber vulnerado sus derechos humanos.

19. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha reiterado que la investigación seria, imparcial y efectiva, es un elemento fundamental y condicionante para la protección de ciertos derechos, tales como la libertad e integridad personal[1], que se encuentran presentes en los hechos materia de la presente Recomendación. Así, tenemos que, las obligaciones estatales, cuyos elementos son señalados como responsables de violaciones a los derechos y libertades fundamentales, tienen la obligación convencional de coadyuvar con la investigación de las mismas, proporcionando toda la información necesaria para ello, al resultar esto un componente clave para la obtención de justicia, y para la salvaguarda de los derechos fundamentales de los agraviados. En este sentido, y toda vez que los elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal fueron señalados de vulnerar en perjuicio de los agraviados, sus derechos a la legalidad y seguridad jurídica, en relación a no ser objeto de detenciones arbitrarias, así como de su derecho a la integridad y seguridad personal, la autoridad municipal tenía el deber de proporcionar toda la información necesaria para determinar la responsabilidad de éstos. No obstante, se observa una negativa constate para ello, llegando incluso al extremo de justificar la desobediencia de un mandamiento judicial, y la negativa de su participación en los mismos, sin proporcionar elementos de prueba que soporten sus afirmaciones.

20. Aunado a lo anterior, personal de esta Comisión, se presentó en las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Valparaíso, Zacatecas, con la finalidad de recabar mayores datos, que pudieran determinar de manera fehaciente, la real participación de los elementos de la referida corporación policiaca, en los hechos denunciados por parte de **A1, A2** y **A3**, por lo que, se recabó comparecencia del **DSP2**, Director de Seguridad Pública Municipal de Valparaíso, Zacatecas, quien, adjuntó copia de las bajas del **C. DSP1**, otrora director, así como del **CDSP1**, elemento de la referida corporación, quienes fueron señalados en el informe del **PM1**, Presidente Municipal de Valparaíso, Zacatecas, como intervinientes del hecho que ahora se resuelve.

21. Además de lo anterior, personal de esta Comisión, cuestionó al **DSP2**, Director de Seguridad Pública Municipal de Valparaíso, Zacatecas, respecto al referido grupo “P”, mismo que el **PM1**, Presidente Municipal de Valparaíso, Zacatecas, señaló en su contestación de informe, refiriendo que la denominación de los grupos, depende del director de turno, realizándose con la finalidad de llevar un mejor control en la organización interna de la corporación. Asimismo, manifestó que, la mayor parte de los elementos que integran actualmente la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Valparaíso, Zacatecas, no cuentan con más de un año de servicio, puesto que la corporación se ha ido renovando en cuanto a su personal, aseverando que desconoce los elementos que pudieran haber integrado el 01 de octubre de 2019, el grupo “P”.

22. En ese mismo sentido, personal de esta Comisión, le solicitó al **DSP2**, Director de Seguridad Pública Municipal de Valparaíso, Zacatecas, copia del reporte realizado el día 01 de octubre de 2019, relacionado con los hechos que aquí se resuelven, el cual, brindó

[1] Corte IDH. Caso Ríos y otros Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C, No. 194, párr. 298.

acceso al registro, obteniendo que, de acuerdo a éste, fue recibido un reporte anónimo en el 911, a las 14:45 horas, en donde señalaron que se escucharon detonaciones de arma de fuego en la comunidad del […], para lo cual, acudió el **C. DSP1+**, otrora director de Seguridad Pública, junto con el **CDSP1,** a cargo del grupo "P", a bordo de las unidades 123 y 119. Una vez que se encontraron en dicha comunidad, se encuentran con un grupo de elementos de la Policía Estatal Preventiva, quienes les solicitaron el apoyo de una ambulancia para el traslado de una persona lesionada al Hospital Regional de Fresnillo, Zacatecas. El reporte señala además que, las unidades de la Policía Estatal Preventiva, que se encontraban en el lugar, estaban marcadas con los números 585, 469 y 847, retirándose de ese lugar a las 18:50 horas.

23. Así pues, se cuenta con la información proporcionada por parte del **DSP2**, Director de Seguridad Pública Municipal de Valparaíso, Zacatecas, el cual señaló que desconoce quiénes hayan integrado el grupo P el 01 de octubre de 2019, además de que brindó el reporte recibido en ese fecha, en el sistema de emergencias 911, mismo que es manejado por parte de esa Dirección. Sin embargo, no se cuenta con el registro de los elementos que ese día abordaron las unidades 119 y 123 de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Valparaíso, Zacatecas, lo cual, denota una falta de control efectivo en el registro que se recaba por parte de la corporación referida, puesto que, con ello, además de las bajas del **C. DSP1+**, otrora director, y del **CDSP1**, no se puede contar con la comparecencia de los elementos que participaron en los hechos, ya que se desconoce con precisión por parte de esta Comisión, quiénes fueron éstos, por lo que no fue posible, llevar a cabo las declaraciones de los elementos intervinientes.

24. Por lo anterior, se insta a la autoridad ministerial para que realice una investigación de los hechos que nos ocupen, que permita determinar cuál fue la participación real de los elementos de la Dirección de Seguridad Pública del Municipio de Valparaíso, Zacatecas, y se determine la responsabilidad en que éstos pudieron haber incurrido, así como aquélla que corresponda al **PM1**, Presidente Municipal de Valparaíso, Zacatecas.

VII. SOBRE LOS DERECHOS VULNERADOS.

a) Derecho a la legalidad y seguridad jurídica, en su modalidad de derecho a no ser detenido arbitrariamente.

1. La seguridad jurídica, es el derecho que tiene toda persona a vivir dentro de un estado de derecho, es decir, bajo la tutela de un ordenamiento jurídico que imponga los límites de las atribuciones de cada autoridad; su actuación no se debe regir de forma arbitraria, sino que debe quedar restringida a lo que ordenan expresamente los artículos 14 y 16 constitucionales[2]. La observancia de la Ley se convierte en el principio básico para la vida pública; ya que este es la condición que da certeza a las personas de que, los funcionarios, no actuarán discrecionalmente, sino que sus actos se encuentran estrictamente enmarcados en un ordenamiento jurídico que los prevé[3].

2. La interdependencia existente entre el derecho a la legalidad y seguridad jurídica es tal, que sus contenidos dan sentido a los contenidos de ambos. Así, mientras la seguridad jurídica nos permite conocer nuestros derechos y obligaciones de modo claro y preciso, el principio de legalidad requiere que todo acto destinado a producir efectos jurídicos debe tener como base una disposición y un procedimiento legal[4].

3. En este sentido, en el Sistema Universal de Derechos Humanos, el derecho a la seguridad jurídica y a la legalidad, se encuentra reconocido tanto en la Declaración Universal de Derechos Humanos[5], como en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos[6], al

---

2 Recomendación 25/2016, Sobre el Recurso de Impugnación de R, por Violación a su Derecho a la Seguridad Jurídica y a la Legalidad.
3 Recomendación 25/2016, Sobre el Recurso de Impugnación de R, por Violación a su Derecho a la Seguridad Jurídica y a la Legalidad.
4 STC 27/1981, de 20 de julio de 1981, publicada en BOE no. 193, de 13 de agosto de 1981.
5 Cfr. con el contenido del artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
6 Cfr. con el contenido de los artículos 6, 9 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

señalarse que ninguna persona puede ser objeto de injerencias arbitrarias en su vida, familia, derechos, posesiones, etc.

4. Por su parte, en el Sistema Interamericano, se señala que ambos derechos se consagran en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre[7], así como en la Convención Americana sobre Derechos Humanos[8], al señalarse que todas las personas tienen derecho a la protección de la ley contra actos que tengan injerencias arbitrarias en su honra, reputación, vida privada y familiar, así como en su libertad.

5. En nuestro sistema jurídico nacional, el derecho a la seguridad jurídica y el principio de legalidad se encuentran consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al proteger la libertad y seguridad de las personas, a partir de la exigencia de que todos los actos de autoridad que causen sobre éstas molestias así como en su familia, propiedades o posesiones, deben estar debidamente fundados y motivados. Es decir, las autoridades sólo podrán hacer aquello para lo que están expresamente facultadas y obligadas en una ley y, todo acto o procedimiento por el cual se interfiera en la esfera jurídica de un gobernado, debe estar previsto en una norma legal.

6. En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado, a través de la Tesis Aislada con registro 2005766, que el principio de legalidad constituye una garantía del derecho humano a la seguridad jurídica, consistente en que las autoridades sólo pueden hacer aquello para lo que están expresamente facultadas por la ley. De ahí que, aquellos actos realizados por éstas, sin el amparo de una facultad expresa, se considerarán arbitrarios:

> “Época: Décima Época
> Registro: 2005766
> Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
> Tipo de Tesis: Aislada
> Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
> Libro 3, Febrero de 2014, Tomo III
> Materia(s): Constitucional
> Tesis: IV.2o.A.51 K (10a.)
> Página: 2239
>
> PRINCIPIO DE LEGALIDAD. CARACTERÍSTICAS DE SU DOBLE FUNCIONALIDAD TRATÁNDOSE DEL ACTO ADMINISTRATIVO Y SU RELACIÓN CON EL DIVERSO DE INTERDICCIÓN DE LA ARBITRARIEDAD Y EL CONTROL JURISDICCIONAL.
>
> Del artículo 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierten los requisitos de mandamiento escrito, autoridad competente y fundamentación y motivación, como garantías instrumentales que, a su vez, revelan la adopción en el régimen jurídico nacional del principio de legalidad, como una garantía del derecho humano a la seguridad jurídica, acorde al cual las autoridades sólo pueden hacer aquello para lo que expresamente les facultan las leyes, en el entendido de que éstas, a su vez, constituyen la manifestación de la voluntad general. Bajo esa premisa, el principio mencionado tiene una doble funcionalidad, particularmente tratándose del acto administrativo, pues, por un lado, impone un régimen de facultades expresas en el que todo acto de autoridad que no represente el ejercicio de una facultad expresamente conferida en la ley a quien lo emite, se considerará arbitrario y, por ello, contrario al derecho a la seguridad jurídica, lo que legitima a las personas para cuestionar la validez de un acto desajustado a las leyes, pero, por otro, bajo la adopción del mismo principio como base de todo el ordenamiento, se genera la presunción de que toda actuación de la autoridad deriva del ejercicio de una facultad que la ley le confiere, en tanto no se demuestre lo contrario, presunción de legalidad ampliamente reconocida tanto en la doctrina como en la legislación nacional. Así, el principio de legalidad, apreciado en su mayor amplitud, da cabida al diverso de interdicción de la arbitrariedad, pero también conlleva que éste opere a través de un control jurisdiccional, lo que da como resultado que no basta que el gobernado considere que determinado acto carece de fundamentación y motivación para

7 Cfr. con el contenido de los artículos V y XXV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.
8 Cfr. con el contenido del artículo 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

> que lo estime no obligatorio ni vinculante o lo señale como fuente de un derecho incontrovertible a una sentencia que lo anule, sino que, en todo caso, está a su cargo recurrir a los órganos de control a hacer valer la asumida ausencia o insuficiencia de fundamento legal y motivación dentro de dicho procedimiento y, a su vez, corresponderá a la autoridad demostrar que el acto cuestionado encuentra sustento en una facultad prevista por la norma, so pena de que sea declarado contrario al derecho a la seguridad jurídica, lo que revela que los procedimientos de control jurisdiccional, constituyen la última garantía de verificación del respeto al derecho a la seguridad jurídica, cuyas reglas deben ser conducentes y congruentes con ese propósito.
>
> SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.

7. Es en este sentido que, el mismo artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual, como se ha visto previamente, contempla el principio de legalidad, de igual forma, hace alusión a las formas en las cuales, las personas pueden ser privadas de su libertad de manera legal, por lo que, ello conlleva una estricta relación entre el derecho a la legalidad y seguridad jurídica, con el derecho a la libertad personal, el cual es aquel que posee todo individuo de disponer de sí mismo y de obrar según su propia voluntad, limitado únicamente por los derechos de terceros y los diversos dispositivos jurídicos que permiten tener una convivencia ordenada[9]. “La libertad personal es la libertad física en el que se encuentran las personas, misma que debe ser protegida contra toda interferencia ilegal o arbitraria del estado”[10].

8. Dicho derecho a la libertad personal, encuentra su sustento en el Sistema Internacional, a través de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en donde, señala en su artículo 3, que: “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”. En ese mismo sentido, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en los numerales 9.1, 9.2 y 9.3, dispone que todas las personas tienen derecho a la libertad y a la seguridad personales, quedando prohibidas cualquier forma de detención o prisión arbitrarias.

9. En el sistema interamericano, la Convención Americana sobre Derechos Humanos en los artículos 7.1, 7.2 y 7.3, conviene: “1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales, 2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas y 3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios”.

10. Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señala que, la privación de la libertad es considerada como cualquier forma de detención, encarcelamiento, institucionalización, o custodia de una persona, por razones de asistencia humanitaria, tratamiento, tutela, protección, o por delitos e infracciones a la ley, ordenada por o bajo control de facto de una autoridad judicial o administrativa o cualquier otra autoridad, ya sea en una institución pública o privada[11].

11. Para que la autoridad pueda restringir o limitar el ejercicio de este derecho, debe cumplirse con los requisitos formales y materiales del mismo, con el fin de evitar el abuso del poder estatal, tal y como es establecido por el principio a la legalidad. Por esa razón, la jurisprudencia de la Corte Interamericana, ha asumido de manera reiterada que: “cualquier restricción al derecho a la libertad personal debe darse únicamente por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas o por las leyes dictadas conforme a ellas (aspecto material), y además, con estricta sujeción a los procedimientos objetivamente definidos en la misma (aspecto formal)[12]”.

---

[9] CNDH. Recomendación 13/2017 del 30 de marzo de 2017, Párr. 95.

[10] Amparo Directo en Revisión 3506/2014, resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, párrafos 129 y 130. 24/62

[11] Recomendación No. 11 /2016 Sobre el Caso de la Detención Arbitraria, Desaparición Forzada y Ejecución Arbitraria en agravio de V1, en Anáhuac, Nuevo León, emitida por la CNDH, Ciudad de México, a 21 de marzo de 2016.

[12] Corte Interamericana de Derechos Humanos, Cuadernillo de Jurisprudencia No. 8

12. El incumplimiento de estos requisitos pueden llevar a la materialización de una detención que puede calificarse como ilegal y/o arbitraria. Es claro que la inobservancia de los aspectos formal y material de la detención, implican que la misma sea ilegal. Asimismo, las autoridades que ejecuten la detención deben respetar y garantizar los derechos de la persona detenida, previamente reconocidos en el artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[13].

13. Sobre la arbitrariedad de las detenciones, la Corte Interamericana ha señalado también que, tal y como lo establece el artículo 7.3 de la Convención Americana, "nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento por causas y métodos que aún calificados de legales pueden reputarse como incompatibles con el respeto a los derechos fundamentales del individuo por ser, entre otras cosas, irrazonables, imprevisibles, o faltos de proporcionalidad"[14]. En ese sentido, las agresiones físicas injustificadas y desproporcionadas, así como las agresiones o intimidaciones psicológicas que lleven a cabo las autoridades en el momento de la detención, califican a ésta como arbitraria.

14. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Chaparro Álvarez estableció que, los derechos a la libertad y seguridad personal, se encuentran regulados en el artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El derecho a la libertad personal "protege exclusivamente el derecho a la libertad física y cubre los comportamientos corporales que presuponen la presencia física del titular del derecho y que se expresan normalmente en el movimiento físico".

15. La Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, establece que nadie puede ser privado de su libertad, sino en los casos y según las formas establecidas por leyes preexistentes. [15] En ese sentido, el Estado Parte, tiene la obligación de tomar medidas de carácter legislativo, administrativo y, ejecutivo, para llevar a cabo detenciones de acuerdo a la ley, por medio de las instituciones encargadas de la Procuración de Justicia, por conducto de las Agencias del Ministerio Públicos, de la Procuraduría General de Justicia y, por conducto de los Jueces del Poder Judicial local.

16. El artículo 9.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, menciona que todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal, y que nadie podrá ser sometido a detención o privación arbitrarias. Así mismo, señala que nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por la ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta. Además, señala el deber del Estado, por conducto de las instituciones jurídicas competentes, para informar a la persona a ser informada, al momento de su detención, de las razones de la misma, y notificarle sin demora, de la acusación formulada en su contra. [16]

17. En el ámbito normativo nacional, el derecho a la libertad personal se encuentra reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 14, párrafo segundo, el cual dispone que: "Nadie podrá ser privado de la libertad (…) sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho"[17]. En el mismo sentido el artículo 16, párrafo primero, constitucional establece que: "Nadie puede ser molestado en su persona (…) sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento[18]".

18. Entonces pues, el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, faculta la detención de cualquier persona, empero, únicamente cuando se justifiquen los siguientes tres formalismos: mediante **orden de aprehensión** girada por el

---

[13] Ídem

[14] Artículo 7.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

[15] Artículo XXV de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre.

[16] Artículo 9.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

[17] Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 14

[18] Ídem, Artículo 16

Juez competente, por **orden de detención en caso urgente** girada por el Ministerio Público, o bien, en caso de **delito flagrante.**

19. Es en este sentido que, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que, el derecho a la libertad ≪comprende la posibilidad y el ejercicio positivo de todas las acciones dirigidas a desarrollar las aptitudes y elecciones individuales que no pugnen con los derechos de los demás, ni entrañen abuso de los propios≫ y que, por tal motivo, la libertad personal es un derecho humano protegido tanto por la Constitución Federal (artículos 1, 11, 14 y 16) como en el ámbito internacional (artículos 2, 4 y 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; art. 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; arts. I y XXV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y art. 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos)[19], por lo que el derecho a la libertad personal es reconocido como de primer rango y solo puede ser limitado bajo determinados supuestos de excepcionalidad, en armonía con la Constitución Federal y los instrumentos internacionales en la materia[20].

20. Aunado a lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se ha pronunciado a través de las siguientes tesis jurisprudenciales:

> "DETENCIÓN QUE NO REÚNE LOS REQUISITOS DEL ARTICULO 16 CONSTITUCIONAL EN VIGOR. SOLO PUEDE EXAMINARSE SI SE RECLAMA EN EL JUICIO DE AMPARO COMO ACTO AUTÓNOMO E INDEPENDIENTE DEL AUTO DE FORMAL PRISIÓN.
> Si bien es cierto que el ARTÍCULO 16 constitucional en su párrafo primero señala que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, salvo las excepciones que se precisan en los párrafos cuarto y quinto del citado precepto constitucional, esto es, cuando se trata del delito flagrante, en que cualquier persona puede detener al indiciado, o cuando se trata de delito grave así calificado por la ley y ante el riesgo fundado de que el indiciado puede sustraerse a la acción de la justicia, también es cierto que no es posible examinar y decidir en el juicio de garantías, sobre la legalidad o no de la detención cuando se impugna el auto de formal prisión, esto es, cuando sólo se señala como acto reclamado el auto de término constitucional, pero no se reclama como acto destacado el acuerdo mediante el cual el juez natural radica la causa y debe examinar la legalidad de la detención, pues se abordarían aspectos que no formaron parte de la litis en el amparo, los que no son materia de suplencia ya que ésta sólo comprende conceptos de violación o agravios.
>
> PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.
> Amparo en revisión 36/94. José Luis de Jesús Roque y otros. 14 de abril de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Dueñas Sarabia. Secretario: Ezequiel Tlecuitl Rojas.
> Nota: Este criterio ha integrado la jurisprudencia VI.1o. J/1, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo I, Junio de 1995, pág. 301."[21]
>
> "FLAGRANCIA. LA DETENCIÓN DE UNA PERSONA SIN EL CUMPLIMIENTO IRRESTRICTO DEL MARCO CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL QUE REGULA AQUELLA FIGURA, DEBE CONSIDERARSE ARBITRARIA.
> El artículo 16, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé la siguiente descripción: "Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más cercana y ésta con la misma prontitud, a la del ministerio público. Existirá un registro inmediato de la detención.". Por su parte, los artículos 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos prevén como requisitos para que la detención de una

---

[19] Tesis aislada 1ª. CXCIX/2014 (10°), de rubro "libertad personal. LA AFECTACIÓN A ESE DERECHO HUMANO ÚNICAMENTE PUEDE EFECTUARSE BAJO LAS DELIMITANTES EXCEPCIONALES DEL MARCO CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL" (TMX 313953).

[20] Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos comentada, José Ramón Cossío Díaz (Coordinador), Tomo 1, Editor Tirant lo Blanch.

[21] Localización: Octava Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo: XIII-Junio. Página 557.

> persona sea válida que: 1. Sus causas y condiciones estén fijadas de antemano en la Constitución y en la ley; 2. Prohibición de la detención arbitraria; 3. La persona detenida debe ser informada, en el momento de su detención, de las razones de la misma, y notificada, sin demora, de los cargos formulados contra ella; 4. La persona detenida será llevada sin demora ante la autoridad competente que verifique la legalidad de la detención; 5. Se ordene su libertad si la detención fue ilegal o arbitraria.
>
> Amparo en revisión 703/2012. 6 de noviembre de 2013. Cinco votos por la concesión del amparo de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Mayoría de tres votos por el amparo liso y llano de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Disidentes: José Ramón Cossío Díaz y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Encargado del engrose: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretario: José Alberto Mosqueda Velázquez”.[22]

21. Es así que, como se mencionó con anterioridad, el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece las condiciones que deben cumplir los actos de molestia a cargo de la autoridad. Se resumen en tres: expresarse por escrito, provenir de una autoridad competente y que en el documento escrito en el que se exprese se funde y motive la causa legal del procedimiento[23].

22. La primera exigencia se explica por la certeza de la existencia del acto de molestia y constituye un requisito mínimo para que la persona a quien se dirige conozca con precisión la autoridad que lo expide, su contenido y sus consecuencias[24]. La segunda supone que la emisora del acto este facultada constitucional o legalmente y tenga la facultad de emitirlo dentro de sus atribuciones[25].

23. En ese contexto, la autoridad tiene el deber de fundar con precisión su competencia a fin de poner en conocimiento del particular la norma legal que la faculta a emitir el acto de molestia que afecta su esfera jurídica, pues su eficacia o validez dependerá de que se haya realizado por el órgano de la administración de que se trate dentro del respectivo ámbito de sus atribuciones[26].

24. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que la fundamentación implica expresar con precisión el precepto legal aplicable al caso, y la motivación comprende señalar con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto. Esto último satisface el aspecto formal de dicha garantía, y el material se cumple si existe adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables; es decir, es necesario que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas[27]

25. Respecto de la flagrancia, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 1596/2014, señaló que lo flagrante es aquello que brilla a todas luces, que es evidente e inconfundible, por lo que la concurrencia de una conducta delictiva flagrante es una condición que se configura antes de la detención. Ello implica que la autoridad no tiene facultades para detener a una persona ante la sola sospecha de que pudiera estar cometiendo un delito (o de que estuviera por cometerlo), o

---

[22] Época: Décima Época, Registro: 2006476, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo I, Materia(s): Constitucional, Tesis: 1a. CC/2014 (10a.), Página: 545.

[23] Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos comentada, José Ramón Cossío Díaz (Coordinador), Tomo 1, Editor Tirant lo Blanch.

[24] Tesis Aislada I. 3. C.52 (9°), de rubro “ACTOS DE MOLESTIA. REQUISITOS MÍNIMOS QUE DEBEN REVESTIR PARA QUE SEAN CONSTITUCIONALES” (TMX 211938)

[25] Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos comentada, José Ramón Cossío Díaz (Coordinador), Tomo 1, Editor Tirant lo Blanch.

[26] Ídem.

[27] Tesis Jurisprudencial registro: 1238212 (7°), de rubro “FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN” (TMX 128555).

porque presuma que esté involucrado en la comisión de un delito objeto de investigación si no cuenta con una orden de detención del órgano ministerial[28].

26. Para que la detención en flagrancia sea válida tiene que darse alguno de los siguientes supuestos: a) la autoridad puede aprehender al aparente autor del delito si observa directamente que la acción se está cometiendo en ese preciso instante, esto es, en el iter criminis; b) la autoridad puede iniciar la persecución del aparente autor del delito para aprehenderlo si, mediante elementos objetivos, es posible identificarlo y corroborar que, apenas en el momento inmediato anterior, se encontraba cometiendo el delito denunciado[29].

27. Finalmente, en relación a la flagrancia, es necesario tomar en consideración las pautas expresadas por la Corte Interamericana en la sentencia del *Caso Norín Catrimán y otros* (Dirigentes, miembros y activista del Pueblo Indígena Mapuche) *vs. Chile*, que señaló que las características que debe tener una medida de detención o prisión preventiva para ajustarse a las disposiciones de la Convención Americana, deben fundarse en elementos probatorios suficientes que permitan suponer razonablemente que la persona sometida a proceso ha participado en el ilícito que se investiga.

28. Respecto del tercer supuesto de detención que maneja el artículo 16 constitucional, debe decirse que mediante ejecutoria del 3 de junio de 2015, emitida en el amparo directo en revisión 3506/2014, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, destacó las siguientes características ontológicas atribuidas por la Constitución Federal a las detenciones por caso urgente: a) es una restricción al derecho a la libertad personal; b) es extraordinaria, pues deriva de condiciones no ordinarias, como el riesgo fundado de que la persona acusada de cometer un delito grave se sustraiga de la acción de la justicia y que por razón de la hora, lugar o circunstancia, el Ministerio Publico no pueda ocurrir ante la autoridad judicial a solicitar una orden de aprehensión; c) es excepcional, pues se aparta de la regla general sobre el control judicial previo dentro del régimen de detenciones y d) debe estar, siempre, precedida de una orden por parte del Ministerio Publico, una vez que se han acreditado los tres requisitos que la autorizan: d.i) que se trate de un delito grave, d.ii) que exista riesgo fundado de que el inculpado se fugue, y d.iii) que por razones extraordinarias no sea posible el control judicial previo.

29. En el caso específico que nos ocupa en la presente recomendación, se analizará la legalidad de las detenciones de las que fueron objeto **A1, A2 y A3**, por parte de elementos de la Policía Estatal Preventiva, de la Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas, el día 01 de octubre de 2019, en la comunidad de El […], Valparaíso, Zacatecas.

30. Así pues, se cuenta con la versión proporcionada al personal de esta Comisión, por parte de **A1**, en la que señaló que, el día 01 de octubre de 2019, aproximadamente a las 15:00 horas, se dirigía en compañía de **M1**, a bordo de una camioneta Ford Ranger, color arena, con una traila color azul, de la Comunidad de El […] a la comunidad de Asiana, del municipio de Valparaíso, Zacatecas. Menor del que afirmó saber nada. Manifestó que, mientras realizaba ese recorrido, fue interceptado por unas patrullas de la Policía Estatal Preventiva, de la Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas, de la cual descendieron **PEP1+** y **PEP27**, quienes, sin decirle nada, lo comenzaron a golpear; que, posteriormente, lo subieron a una de las patrullas, siendo pisoteado por los elementos que se encontraban a bordo de ésta. Asimismo, refiere que, **aproximadamente 11 minutos después, escuchó detonaciones por alrededor de 5 minutos, pero que, como iba acostado, no vio nada, pero escuchó que gritaban que ya habían matado a su comandante**, y que, enseguida, varios policías estatales, y el Director de Seguridad Pública de Valparaíso, lo bajaron de la patrulla y comenzaron a golpearlo. Finalmente, refiere que **también golpearon a su amigo […]**, quien también estaba detenido.

31. Ahora bien, en fecha 08 de octubre de 2019, **A1** amplió su declaración, afirmando que su detención fue alrededor de las 13:00 horas, y añadió que mientras lo golpeaban, escuchaba como el menor que lo acompañaba se quejaba, pero que no supo donde quedó éste, ya que

---

[28] Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos comentada, José Ramón Cossío Díaz (Coordinador), Tomo 1, Editor Tirant lo Blanch.
[29] Ídem.

lo subieron boca abajo en una patrulla. Asimismo, refirió que cuando **llevaban 10 minutos de trayecto, se detuvieron, y comenzó a escuchar detonaciones, y a una mujer que lloraba y decía que le mataron a su papá; que fue ella quien lo bajó de la patrulla y comenzó a golpearlo nuevamente, y a dos muchachos más que también iban detenidos**, por un lapso de treinta minutos, hasta que llegó una ambulancia y protección civil. En adición, afirma que los elementos de la policía municipal sólo miraban, y no hicieron nada para evitar que los golpearan, y asevera que el Director de dicha corporación se acercó y le dio una patada en la mandíbula del lado derecho.

32. Por otra parte, en fecha 27 de noviembre de 2019, **A1** interpone formal denuncia en contra de los elementos que participaron en su detención, agregando en ésta que, el menor que lo acompañaba es conocido como **M1,** y proporciona el domicilio de éste. Asimismo, señaló que **a éste también lo bajaron de su camioneta, y que lo estaban golpeando también, ya que escuchaba que lloraba y gritaba.** En esta versión, añade que después de unos diez minutos de estar de recorrido, **las patrullas se detuvieron en un sembradío, y pudo escuchar que PEP1+ les decía a los policías que también subieran al de la moto**, es decir, que detuvieron a otra persona, **que luego escuchó detonaciones y comenzaron a gritar que mataron al comandante**. Momento en que los policías estatales lo bajaron de la camioneta y comenzaron a golpearlo, al igual que a los otros detenidos.

33. Ahora bien, en la audiencia de control de detención, formulación de imputación, imposición de medida cautelar, realizada en fecha 04 de octubre de 2019, **A1 afirmó que al momento en que la Policía Estatal lo detiene y lo sube a una patrulla, se percata que ya venía detenido A2**, al que llevaban también golpeado y esposado en otra camioneta, que a los **5 minutos de que lo subieron a la patrulla, escucha una moto, y que a su conductor también lo paran y le hacen lo mismo que a ellos**, golpearlo y subirlo a una patrulla; que nuevamente, cuando llevaban otros 5 minutos de camino, cuando el comandante le dijo que se iba a morir, que lo golpearon otra vez, **y que ahí con él iba un menor que trabajó con él (M1), al que bajaron de la patrulla y volvieron a golpear, y del cuál no sabe nada,** y lo dejan ahí, que escucha luego detonaciones y gritos por un lapso de 2 a 5 minutos, y gritos de que mataron al comandante, y lo bajan de la patrulla por los pies, y comienzan a golpearlo los estatales.

34. De las versiones vertidas por **A1** es posible advertir la existencia de varias inconsistencias, que afectan la credibilidad de la misma. Por una parte, en su primera declaración, éste afirmó que sólo lo detienen a él, mientras que al menor lo dejan abandonado, junto con la camionera de su propiedad. Asimismo, afirmó no saber nada del menor. Sin embargo, posteriormente proporcionó datos de localización, y afirmó que también a él lo detuvieron y lo subieron a la patrulla. Por otra parte, en su primera versión refiere que se percató que **A2** también estaba detenido, cuando lo golpearon después de que escuchara que **PEP1+** estaba muerto. No obstante, en la audiencia de control de detención, afirmó que cuando lo detuvieron, pudo ver que **A2** ya estaba detenido, y que se encontraba golpeado, y que después de que lo detuvieron a él, detuvieron a una persona que iba en una moto, que transcurrieron unos cinco minutos de eso, cuando escuchó detonaciones y gritos que decían que el comandante estaba muerto. Versión contraria a la rendida en su denuncia de fecha 27 de noviembre, en la que afirmó escuchar que detuvieron a una moto, y enseguida empezaron detonaciones.

35. Ahora bien, por lo que respecta a la detención de **A2,** éste señaló en su comparecencia ante personal de esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas que, se dirigía de la Comunidad de El […], a la Colonia […], de Valparaíso, Zacatecas, en compañía de **T1, T3** y **M2**, a bordo de un vehículo modelo malibú 2001, verde con negro, cuando observó la presencia de 4 patrullas, 2 de la Dirección de Seguridad Pública municipal de Valparaíso, Zacatecas, y 2 de la Policía Estatal Preventiva, para lo cual, una de las patrullas de la primera corporación referida, le cerró el paso. Señaló que, en ese momento se acercó un comandante de la Policía Estatal Preventiva, quien le ordenó que descendiera del vehículo, golpeándolo y bajándolo violentamente. Todo esto, frente a la presencia de la familia del quejoso. Asimismo, afirma que lo subieron a la caja de una patrulla, dejando que su familia se fuera, mientras a él se lo llevan rumbo a la comunidad de […]; que unos **500 metros más adelante, encontraron una camioneta con una traila, en la que iban A1 y**

un menor de edad, a los que les cierran el paso, que a A1 lo bajan y hacen lo mismo que con él, se lo llevan en la patrulla, afirmando que del menor ya no supo nada, mientras que a él y a A1 se los llevan rumbo a la referida comunidad; que, sin embargo, comienzan detonaciones, en donde resulta privado de la vida el comandante, y que en ese momento comienzan a golpearlos, junto con otro muchacho que no supo cómo llegó a ahí.

36. Posteriormente, en fecha 08 de octubre de 2019, **A2** amplía su declaración, afirmando en ésta que posteriormente a que lo detienen a él, se encuentran en el camino, **a unos 500 metros, a A1, y a un menor que le dicen M1, a quienes golpean, y que pudo ver como subieron a A1 a la caja de una patrulla**; que una vez que reiniciaron su camino, como a los **30 minutos, se encuentran a un muchacho en una moto,** al que le echan la patrulla encima, provocando que éste se callera, y que lo suben también en una patrulla, al parecer en la misma en la que iba **A1.** Refirió que, siguieron hasta un camino, en donde abrieron un portón de palos, y vio una finca de block, que **PEP1+** se bajó, y luego escuchó detonaciones, y vio como dos personas corrían.

37. Por su parte, en la denuncia de 27 de noviembre de 2019, **A2** afirmó que **al haber recorrido 6 kilómetros después de que lo detienen a él, se encuentran con A1,** a quien bajan de su camioneta y golpean, junto con otro muchacho al que escucha gritar**, y que los suben a los dos en otra patrulla**; que, siguieron su recorrido y, como a los 20 minutos, vio a un hombre en una motocicleta, al que le cerraron el paso y también detienen, que después los llevan hasta una finca de block, donde comienzan detonaciones y resulta muerto el comandante, que ahí lo detienen junto con las otras dos personas, pero del menor ya no supo nada.

38. Ante la autoridad judicial, en fecha 04 de octubre de 2019, **A2** afirmó que detuvieron y golpearon a **A1** y **M1,** que luego detuvieron al "[…]". Afirmó también que después de que mataron a **PEP1+** ya no vio nada, porque lo pusieron boca abajo.

39. En las declaraciones rendidas por **A2** en diversos momentos, es posible advertir al menos dos inconsistencias. En su primera declaración, afirma que, a 500 metros de donde lo detuvieron él, se encuentran con la camioneta donde viajaban **A1** y un menor. Sin embargo, posteriormente refiere que el encuentro se dio a 6 kilómetros. Por otra parte, en su primera declaración, afirma que sólo detuvieron a **A1,** mientras que, en sus subsecuentes declaraciones, afirma que los golpearon y detuvieron a los dos. Asimismo, mientras en la primera declaración los hechos acontecen en lapsos de 5 minutos (las detenciones de **A1, A2** y el enfrentamiento en que pierde la vida **PEP1+),** en las posteriores declaraciones afirma que los lapsos van de 20 a 30 minutos.

40. Finalmente, **A3** afirmó ante este Organismo **afirmó que dos patrullas de la estatal se le atravesaron cuando iba en su motocicleta y comenzaron a golpearlo. Asimismo, afirma que después llegaron otras patrullas con otros detenidos**, y que se lo llevaron a un cuarto donde había dos muertos, uno al que le decían la Camila.

41. En su denuncia de fecha 27 de noviembre de 2019, **A3** afirmó que cuando iba circulando en su motocicleta, en una terracería del […], **dos patrullas lo interceptaron, lo suben a la patrulla y comienzan a golpearlo, afirmando que lo trasladan a una finca de block, y que ahí lo tienen con otros dos detenidos**.

42. Sin embargo, en su declaración de 4 de octubre de 2019, afirmó que una vez que lo detuvieron, lo hicieron caminar hacia la casa de block, y que **junto con él iba detenido otro muchacho, morenito, del que no saben nada.** Asimismo, afirmó **que sólo iba A1 también detenido.**

43. En este caso, tenemos que, en un primer momento, **A3** afirmó haber sido detenido por dos patrullas de la policía estatal, y que posteriormente llegaron otras con dos detenidos.

44. A fin de corroborar la versión de los hechos proporcionada por **A2,** personal de esta Comisión, recabó la comparecencia de **T1**, quien señaló que el día 01 de octubre de 2019, se dirigía de la Comunidad de El […], a la Comunidad de […], Valparaíso, Zacatecas, en

compañía de **A2, T3** y **M2**, a bordo de un vehículo malibú color verde, observando 6 patrullas, 2 de la Dirección de Seguridad Pública municipal de Valparaíso, Zacatecas, y 4 de la Policía Estatal Preventiva; que en ese momento, les hicieron el alto y descendió de una patrulla de la Policía Estatal Preventiva, un elemento moreno, de complexión robusta, quien se dirigió con palabras altisonantes a **A2**, solicitando que bajara del vehículo y, de igual forma, dirigiéndose a **T1, T3** y **M2**. Una vez que **A2**, descendió del vehículo, ese oficial ordenó que lo subieran a una patrulla, dirigiéndose rumbo a la comunidad de El […], y **T1, T3** y **M2**, se fueron rumbo a El Vergel.

45. De igual forma, se recabó la comparecencia de **T3**, quien manifestó ante personal de este Organismo que, se dirigía de la Comunidad de El […], a la de El Vergel, a bordo de un vehículo Malibú color verde, con placas americanas, en compañía de **A2**, **T1** y **M2**, cuando se orillaron para que pasaran unas patrullas de la Dirección de Seguridad Pública municipal de Valparaíso, Zacatecas, así como de la Policía Estatal Preventiva; que en ese momento, una de las patrullas de Seguridad Pública municipal pasó junto a ellos, y le preguntaron a **A2**, hacia dónde se dirigían. Posteriormente, descendieron todos los elementos y le solicitaron a **A2** que se bajara del vehículo, realizándolo así, y que, posteriormente, éste fue trasladado a una de las patrullas de la Policía Estatal Preventiva.

46. Como se puede observar, las versiones otorgadas por **A2, T1 y T3**, son coincidentes en señalar que, el 01 de octubre de 2019, los 3, en compañía de **M2**, se dirigían a bordo de un vehículo Malibú color verde, de la Comunidad de El […] a […], cuando observaron diversas patrullas de la Dirección de Seguridad Pública municipal de Valparaíso, Zacatecas, así como de la Policía Estatal Preventiva. Siendo que un oficial de esta última corporación, detuvo a **A2**, subiéndolo a una de las patrullas de la Policía Estatal Preventiva.

47. No obstante, la versión brindada por parte de **A1, A2** y **A3**, contrasta con la señalada por el **DPEP1**, otrora Director de la Policía Estatal Preventiva, de la Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas, el cual manifestó en su informe de autoridad, rendido a esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas que, contrario a lo que señalaron los quejosos, estos fueron detenidos en flagrancia, por los delitos de homicidio y tentativa de homicidio, cometido el primero de ellos en contra de **PEP1+**, y el segundo delito, en contra de los demás elementos que se encontraban en el operativo, en virtud a que, los quejosos participaron en un enfrentamiento armado en contra de los elementos de la Policía Estatal Preventiva, de la Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas, quienes se encontraban realizando un recorrido de seguridad y vigilancia por la Comunidad de El […], Valparaíso, Zacatecas.

48. Ahora bien, de las comparecencias de **PEP2**, **PEP3**, **PEP4**, **PEP5**, **PEP6**, **PEP7**, **PEP8**, **PEP9**, **PEP10**, **PEP11**, **PEP12**, **PEP13**, **PEP14**, **PEP15**, **PEP16**, **PEP17**, **PEP18**, **PEP19**, **PEP20**, **PEP21**, **PEP22**, **PEP23**, **PEP24**, **PEP25** y **PEP26**, elementos de la Policía Estatal Preventiva, de la Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas, se encuentra coincidencia en cuanto a que éstos se encontraban de recorrido por la Comunidad de El […], Valparaíso, Zacatecas, cuando fueron agredidos con armas de fuego por algunas personas que se encontraban en una finca de block, lugar en el que privaron de la vida a **PEP1+**.

49. En ese sentido, de acuerdo a lo señalado por **PEP2**, **PEP3**, **PEP4**, **PEP5**, **PEP6**, **PEP7**, **PEP8**, **PEP9**, **PEP10**, **PEP11**, **PEP12**, **PEP13**, **PEP14**, **PEP15**, **PEP16**, **PEP17**, **PEP18**, **PEP19**, **PEP20**, **PEP21**, **PEP22**, **PEP23**, **PEP24**, **PEP25** y **PEP26**, elementos de la Policía Estatal Preventiva, de la Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas, **A1, A2** y **A3,** fueron detenidos en flagrancia, al haber incurrido en delitos perpetrados en contra de estos, como lo fue el homicidio de **PEP1+** y la tentativa de homicidio en contra de **PEP2**, **PEP3**, **PEP4**, **PEP5**, **PEP6**, **PEP7**, **PEP8**, **PEP9**, **PEP10**, **PEP11**, **PEP12**, **PEP13**, **PEP14**, **PEP15**, **PEP16**, **PEP17**, **PEP18**, **PEP19**, **PEP20**, **PEP21**, **PEP22**, **PEP23**, **PEP24**, **PEP25** y **PEP26**.

50. Asimismo, se cuenta con la comparecencia de **A1, A2, A3, T1** y **T3**, quienes señalaron que las detenciones de los primeros tres, se llevaron a cabo en circunstancias distintas a las que manifestaron los **CC. PEP2**, **PEP3**, **PEP4**, **PEP5**, **PEP6**, **PEP7**, **PEP8**, **PEP9**, **PEP10**, **PEP11**, **PEP12**, **PEP13**, **PEP14**, **PEP15**, **PEP16**, **PEP17**, **PEP18**, **PEP19**, **PEP20**, **PEP21**, **PEP22**, **PEP23**, **PEP24**, **PEP25** y **PEP26,** elementos de la Policía Estatal Preventiva. Es por

ello que, es evidente que se cuenta con dos versiones completamente distintas, respecto a las circunstancias de tiempo, modo y lugar, de las detenciones de **A1, A2** y **A3**.

51. Ahora bien, hay que hacer mención a que, **T1** y **T3**, son familiares directos de **A2**, por lo cual, sus testimonios, pudieran ser parciales para favorecer la versión de éste. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señaló en su tesis emitida por la primera sala, con número de registro digital 262710 que, "*si bien el parentesco no es impedimento para declarar, sí lleva a ver con recelo el testimonio que puede ser intencionalmente parcial*". Por lo cual, el máximo tribunal del país, emitió un criterio, mediante el que señaló, que el parentesco de una persona, en este caso, que se encuentre dentro de un proceso penal, no es impedimento para declarar dentro del mismo, pero, de igual forma, dicho testimonio, pudiera encontrarse afectado de parcialidad, para favorecer al imputado.

52. Tenemos entonces que, **T1** y **T3**, son familiares directos de **A2**, por lo cual, sus testimonios tienden a favorecer y sustentar la versión de **A2**, por lo que, esta Comisión estima que, sus comparecencias, al no contar con ningún otro indicio que haga suponer su credibilidad, se encuentran afectadas de parcialidad, dado el interés directo que éstos tienen en la resolución del conflicto que atañe a **A2**.

53. Aunado a lo anterior, es pertinente señalar que, las versiones dadas por los agraviados resultan inconsistentes, e incluso contradictorias. Así, en audiencia inicial, **A1** afirmó que, al momento de su detención, cuando lo suben a la patrulla, pudo darse cuenta que **A2** ya venía detenido, señalando, incluso, que estaba golpeado. Versión que entra en clara contradicción con la de **A2,** quien afirmó que, después de que lo detienen a él, se toparon con **A1,** a quien también golpearon y detuvieron. Por su parte, **A3** aseguró, ante la autoridad judicial, que cuando lo detuvieron, en la caja en la que lo subieron iba también un muchachito, y que el otro detenido era **A1.** Es decir, no refiere nada respecto a **A2.** En adición, mientras **A1** afirma que cuando lo detienen, los policías dejan a **M1** ahí con su camioneta, y que ya no sabe nada de él, **A2** aseveró que vio como golpearon, detuvieron y subieron a las patrullas a **A1** y **M1.** Por su parte, **A3** refiere haber sido detenido sólo, y que posteriormente llegan las demás patrullas con otros dos detenidos, uno de ellos **A1,** así como un muchachito moreno. Nada refiere acerca de **A2.**

54. Lo anterior denota diversas versiones acerca de la detención de un supuesto menor, ya que, quien dijo trabajar con él, **A1,** aseveró que sólo lo detuvieron a él, dejando al menor abandonado en el lugar. Sin embargo, **A2** afirma haber visto que junto con **A1** detienen al menor, a quien dejan cuando encuentran a **A3.** Mientas que, éste último, afirma que cuando los llevan a una casa de block, donde había varios muertos, ahí estaba el menor, junto con él y **A1.** Contradicciones que restan credibilidad a las declaraciones de los agraviados. Ello, en adición a que los mismos no aportaron indicios de prueba que permitan crear convicción en este Organismo, acerca de la manera en que refieren fueron detenidos.

55. Al respecto, resultan aplicables las siguientes tesis:

> Registro digital: 2018689
> Instancia: Primera Sala
> Décima Época
> Materias(s): Constitucional, Penal
> Tesis: 1a. CCLII/2018 (10a.)
> Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, página 333
> Tipo: Aislada
>
> INMEDIATEZ PROCESAL. SU APLICACIÓN ESTÁ SUBORDINADA A AQUELLOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE UN SISTEMA PROCESAL PENAL DE CORTE DEMOCRÁTICO QUE PERMITEN GARANTIZAR UN JUICIO JUSTO Y UN DEBIDO PROCESO.
>
> El criterio de inmediatez procesal –entendido en el sentido de que permite atribuir cierto grado de verosimilitud a las primeras declaraciones del deponente– es constitucional per se. Sin embargo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que su aplicación se encuentra condicionada

por los principios rectores del debido proceso. Así, dicho criterio es constitucional sólo si es entendido como un lineamiento orientador o un criterio práctico que sirve para decidir, en sede jurisdiccional, cómo valorar la verosimilitud de dos o más declaraciones rendidas por la misma persona, que en alguna medida se oponen o se encuentran en conflicto. Es decir, se trata de un criterio –más que un principio en sentido estricto– que sirve para resolver dudas que atañen a la convicción por virtud de la cual se asigna valor probatorio a la declaración de quien modifica su posición original. Sin embargo, su constitucionalidad tiene importantes condicionamientos, pues este criterio en ningún caso permite a los juzgadores dar prevalencia a una declaración que no ha sido sometida al contradictorio de las partes, o que ha sido rendida sin la debida asesoría jurídica a la que toda persona inculpada tiene derecho. Por tanto, el criterio de inmediatez siempre debe estar subordinado a aquellos principios constitucionales que caracterizan a un sistema procesal penal de corte democrático y que permiten garantizar un juicio justo y un debido proceso.

Amparo directo en revisión 2963/2015. Miguel Ángel Valles Carrasco. 16 de agosto de 2017. Mayoría de tres votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien reservó su derecho para formular voto concurrente, José Ramón Cossío Díaz y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Disidentes: Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto particular y Norma Lucía Piña Hernández. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: Patricia del Arenal Urueta.

Esta tesis se publicó el viernes 07 de diciembre de 2018 a las 10:19 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

Registro digital: 2019884
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Décima Época
Materias(s): Penal
Tesis: I.9o.P.242 P (10a.)
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 66, Mayo de 2019, Tomo III, página 2715
Tipo: Aislada

PRINCIPIO DE INMEDIATEZ EN MATERIA PENAL. SI BIEN EL VALOR PROBATORIO DE LA PRIMERA DECLARACIÓN DE LOS TESTIGOS NO ES ABSOLUTO, ÉSTA MERECE MAYOR VALOR CUANDO LAS POSTERIORES CONTIENEN DATOS RELEVANTES QUE NO SE REFIRIERON EN LAS PRIMERAS.

En relación con la valoración de testigos en materia penal, en la tesis aislada 1a. CCLXXXVIII/2013 (10a.), de título y subtítulo: "PRUEBA TESTIMONIAL. EL PRINCIPIO DE INMEDIATEZ ES APLICABLE SIN IMPORTAR LA CATEGORÍA EN LA CUAL SE PRETENDA CLASIFICAR AL TESTIGO.", la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció la posibilidad de que existan diversas declaraciones de un mismo deponente durante las diversas etapas del proceso penal mixto inquisitivo y señala que en ese caso, deben tomarse en consideración las reglas de la lógica, en relación con las condiciones en que se produjo la percepción por parte del declarante (factores físicos), así como la existencia de algún tipo de interés que pudiera influir sobre su voluntad u otra circunstancia que tenga el alcance de perturbar en su ánimo y que lo aparte consciente o inconscientemente de la verdad (factores psicológicos). Por tanto, determinó que el juzgador, al valorar esa probanza testimonial, no sólo deberá extenderse a esas características o circunstancias que concurran en cada testigo, sino que se ocupará de realizar un ejercicio de confrontación entre las distintas declaraciones del deponente y las de otros, en caso de que existan, a fin de comparar esas manifestaciones con aquella o aquellas que hubiera vertido con anterioridad, incluyendo la emitida en primer término. De modo que para negar valor a las posteriores declaraciones del testigo, se tendrá que hacer uso de la lógica y el raciocinio, con la plena certeza de que no puede generar mayor convicción una declaración posterior que contiene datos relevantes, que se omitan en las primeras, ya sea porque no se haya hecho referencia a aquéllos aunque fuera de manera somera o por lo menos en una parte, que puedan evidenciar que en la posterior sólo se afinen detalles que se han ido recordando, pero siempre

> encaminados sobre la misma versión que se ha dado desde un principio, caso en el que podría excepcionar el principio de inmediatez y conceder valor a las posteriores declaraciones.
>
> NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
>
> Amparo directo 204/2017. 14 de marzo de 2019. Unanimidad de votos. Ponente: Irma Rivero Ortiz de Alcántara. Secretaria: Alejandra Juárez Zepeda.
>
> Nota: La tesis aislada 1a. CCLXXXVIII/2013 (10a.) citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXV, Tomo 2, octubre de 2013, página 1060.
> Esta tesis se publicó el viernes 17 de mayo de 2019 a las 10:22 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

56. Aunado a lo anterior, las autoridades señaladas como responsables presentaron una serie de indicios, que soportan su versión de los hechos. Así, esta Comisión advierte, en primer lugar, que las versiones proporcionadas por los elementos de la Policía Estatal Preventiva, son coincidentes en señalar las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se desarrollo la detención de los agraviados, sin que se aprecien contradicciones entre las mismas. En adición, se corrió traslado a este Organismo de las siguientes documentales públicas, que son coincidentes con dichas declaraciones: Acta de Registro de Detención, Acta de Aviso de Hechos, Actas de Inspección de Personas que les fueran practicadas a los agraviados, Actas de lectura de derechos, así como las Actas de Datos para identificación o individualización de imputados. Asimismo, se cuentan con los dictámenes fisicoquímicos para determinación de residuos de disparo de arma de fuego que les fuera practicados a los 3 agraviados, en los que todos resultaron positivos.

57. Asimismo, es importante señalar que, en fecha 04 de octubre de 2019, el **JC1**, Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento de Valparaíso, Zacatecas, determinó en la audiencia inicial, que la detención de **A1, A2** y **A3**, fue legal.

Sobre la arbitrariedad de la detención de A1, A2 y A3, atribuida a elementos de la Policía Estatal Preventiva, de la Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas, y a elementos de la Dirección de Seguridad Pública del municipio de Valparaíso, Zacatecas.

58. A pesar de que la detención de **A1, A2** y **A3,** es considerada legal, toda vez que existen una serie de elementos que permiten a este Organismo concluir que ésta se desarrolló de conformidad con lo argumentado con la autoridad, se debe ahora analizar si ésta fue o no arbitraria, es decir, si cumplió con los requisitos procedimentales que estipula el marco legal. Toda vez que, los agraviados, refieren haber sido agredidos físicamente por las autoridades captoras. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de su tesis con el número de registro 2006476, en materia constitucional y penal, señaló lo siguiente:

> Época: Décima Época
> Registro: 2006476
> Instancia: Primera Sala
> Tipo de Tesis: Aislada
> Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
> Libro 6, mayo de 2014, Tomo I
> Materia(s): Constitucional, Penal
> Tesis: 1a. CC/2014 (10a.)
> Página: 545
>
> FLAGRANCIA. LA DETENCIÓN DE UNA PERSONA SIN EL CUMPLIMIENTO IRRESTRICTO DEL MARCO CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL QUE REGULA AQUELLA FIGURA, DEBE CONSIDERARSE ARBITRARIA.
>
> El artículo 16, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé la siguiente descripción: "Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad

> más cercana y ésta con la misma prontitud, a la del ministerio público. Existirá un registro inmediato de la detención.". Por su parte, los artículos 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos prevén como requisitos para que la detención de una persona sea válida que: 1. Sus causas y condiciones estén fijadas de antemano en la Constitución y en la ley; 2. **Prohibición de la detención arbitraria**; 3. La persona detenida debe ser informada, en el momento de su detención, de las razones de la misma, y notificada, sin demora, de los cargos formulados contra ella; 4. La persona detenida será llevada sin demora ante la autoridad competente que verifique la legalidad de la detención; 5. Se ordene su libertad si la detención fue ilegal o arbitraria.
>
> Amparo en revisión 703/2012. 6 de noviembre de 2013. Cinco votos por la concesión del amparo de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Mayoría de tres votos por el amparo liso y llano de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Disidentes: José Ramón Cossío Díaz y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Encargado del engrose: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretario: José Alberto Mosqueda Velázquez.

59. Como se puede observar en la tesis que antecede, uno de los requisitos para que se pueda acreditar la detención en flagrancia de cualquier persona, es que no debe ser considerada una detención arbitraria; lo anterior, de conformidad con lo establecido en los artículos 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

60. Además de lo anterior, resulta aplicable el contenido de la tesis en materia constitucional y penal, mediante la cual, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señala que en los casos en los que se lleve a cabo la detención de una persona, y ésta presente lesiones, la carga de la prueba no será para el detenido, sino para la autoridad, como es el caso que nos ocupa. A continuación, se plasma la tesis de referencia:

> “[…] Suprema Corte de Justicia de la Nación
>
> Registro digital: 2005682
> Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
> Décima Época
> Materias(s): Constitucional, Penal
> Tesis: XXI.1o.P.A.4 P (10a.)
> Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 3, Febrero de 2014, Tomo III, página 2355
> Tipo: Aislada
>
> DETENCIÓN DE UNA PERSONA POR LA POLICÍA. CUANDO AQUÉLLA PRESENTA LESIONES EN SU CUERPO, LA CARGA DE LA PRUEBA PARA CONOCER LA CAUSA QUE LAS ORIGINÓ RECAE EN EL ESTADO Y NO EN EL PARTICULAR AFECTADO.
>
> La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido criterios orientadores en el sentido de que el Estado es responsable, en su condición de garante de los derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la observancia del derecho a la integridad personal de todo individuo que se halla bajo su custodia (Caso López Álvarez vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de febrero de 2006. Serie C No. 141). Por lo que existe la presunción de considerar responsable al Estado por las torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes que exhibe una persona que ha estado bajo la custodia de agentes estatales, si las autoridades no han realizado una investigación seria de los hechos seguida del procesamiento de los que aparezcan como responsables de tales conductas (Caso "Niños de la Calle", Villagrán Morales y otros vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 19 de noviembre de 1999. Serie C No. 63). Estos criterios dan pauta objetiva para considerar que la carga de la prueba para conocer la causa que originó las lesiones que presenta en su cuerpo una persona que fue detenida por la policía, recae en el Estado y no en los particulares afectados; sobre todo, si a esos criterios se les relaciona directamente con los

> principios de presunción de inocencia -que implica que el justiciable no está obligado a probar la licitud de su conducta cuando se le imputa la comisión de un delito, pues en él no recae la carga de probar su inocencia, sino más bien, es al Ministerio Público a quien incumbe probar los elementos constitutivos del delito y de la responsabilidad del imputado-; y, pro homine o pro personae -que implica efectuar la interpretación más favorable para el efectivo goce y ejercicio de los derechos y libertades fundamentales del ser humano-
>
> PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO.
>
> Amparo en revisión 144/2013. 15 de agosto de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Carreón Hurtado. Secretario: Ernesto Fernández Rodríguez.
> Esta tesis se publicó el viernes 21 de febrero de 2014 a las 10:32 horas en el Semanario Judicial de la Federación […]" (sic).

61. En el mismo sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el Caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México, señaló que, "La jurisprudencia de este Tribunal también ha señalado que siempre que una persona es detenida en un estado de salud normal y posteriormente aparece con afectaciones a su salud, corresponde al Estado proveer una explicación creíble de esa situación". Por lo cual, en evidente que la carga probatoria, en este caso en particular, es de la autoridad responsable de la detención, y no de las personas agraviadas.

62. Al respecto, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), consideró que para que se trate de una detención arbitraria, se debe producir bajo los siguientes supuestos:

A. Ausencia de normas, reglamentos o leyes que indiquen la existencia de un delito.
B. Se produce una detención por ejercer derechos y libertades
C. Incumplimiento del proceso de detención establecido en las leyes o no se tienen pruebas o evidencia de la comisión de un ilícito.
D. Se genera un juicio que no cumple con el debido proceso establecido en las normas del marco jurídico mexicano e internacional para su realización.

63. Los párrafos precedentes nos permiten determinar que si bien, las autoridades estatales pueden intervenir en el derecho a la libertad de las personas para moverse y actuar voluntariamente y sin restricción alguna más que el respeto a los derechos humanos de terceros, éstas tienen la obligación de llevar a cabo las detenciones conforme a la ley, y con arreglo a los procedimientos establecidos para ello. Consecuentemente, el Estado tiene prohibido detener arbitrariamente a persona alguna. Así, la Suprema Corte de Justicia sostiene que, la autoridad encargada de ejecutar una detención debe hacerlo bajo el respeto irrestricto del sistema constitucional y convencional, a fin de garantizar que se actuó dentro del marco de legalidad.

64. Así pues, como lo ha advertido el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU, una detención se torna arbitraria cuando una persona que ha sido privada de su libertad tras un proceso que no cumplió con las normas establecidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales pertinentes. Entre dichos procesos, se encuentra el realizarla a través de un uso racional de la fuerza pública. Al respecto, la siguiente tesis aislada de la Décima Época, Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación, 2 de octubre de 2015, aislada constitucional. 1ª. CCLXXXVI/2015 (10ª) IUS:2910092, de rubro "DETENCIONES MEDIANTE EL USO DE LA FUERZA PÚBLICA, DEBERES DE LAS AUTORIDADES PARA QUE AQUELLAS NO SE CONSIDEREN VIOLATORIAS DE DERECHOS FUNDAMENTALES", señala que las autoridades deben respetar determinados derechos y garantías, para poder considerar que, cuando emplean la fuerza pública, en alguna detención, se considere que éstas actuaron dentro de un marco de legalidad, de modo que no se vulnere el derecho a la integridad del detenido. Por ello, sus actuaciones deberán respetar los siguientes deberes: a) el empleo de la fuerza estrictamente necesaria para el fin buscado debe realizarse con pleno respeto a los derechos humanos del detenido; b) los funcionarios facultados para llevar a cabo la detención deben estar debidamente identificados; c) deben exponerse las razones de la detención, lo cual incluye no solo el fundamento legal general del aseguramiento, sino también la información de los

suficientes elementos de hechos, que sirvan de base a la denuncia como el hecho ilícito comentado y la identidad de la presunta víctima; en ese sentido por razones se entiende la causa oficial de la detención y no las motivaciones subjetivas de la gente que la realiza; d) debe establecerse claramente bajo la responsabilidad de cuáles agentes es privado de la libertad el detenido; lo cual impone una clara cadena de custodia; e) debe verificarse la integridad personal o las lesiones de la persona detenida; y f) debe constar en un documento la información completa e inmediata de la puesta a disposición del sujeto detenido ante la autoridad que debe calificar su detención.

65. En este sentido, los tres agraviados refieren haber sido golpeados, en reiteradas ocasiones por los elementos captores, incluso, después de que éstos ya estaban sometidos y esposados. Es decir, posteriormente a que ya estaban bajo el control y disposición de éstos. De manera específica, **A1** señaló que dos elementos de la policía estatal lo golpearon con armas largas en las costillas, en la cara y cuello con los puños cerrados, y le daban patadas por todo el cuerpo. Incluso, especifica que, el entonces Director de Seguridad Pública del municipio de Valparaíso, Zacatecas, le dio una patada en la mandíbula. Refirió que cuando el enfrentamiento armado terminó, entre 6 o 7 policías lo golpearon con armas y patadas por todo el cuerpo, que incluso, uno de ellos le detonó un arma de fuego a un lado de su oído, por dos ocasiones. Asevera que, durante todo el trayecto hasta Zacatecas, los policías estatales lo golpearon. Por su parte **A2** mencionó que cuando terminó el tiroteo en el que perdiera la vida **PEP1+,** los elementos de la policía estatal comenzaron a golpearlo a él y a **A1** y a **A3.** Refiere que les daban golpes en la cara con los puños cerrados, en las costillas con las armas, además de patadas por todo el cuerpo, y afirma que lo pusieron encima de un hormiguero, y que todo el trayecto hasta Zacatecas, continuaron golpeándolo. Finalmente, **A3** aseveró que los policías lo patearon en la cara y en el pecho.

66. Por su parte, las autoridades estatales niegan que hayan golpeado a los agraviados, y afirman que ellos mismos las lesiones que presentan fueron producto del enfrentamiento armado que se suscitó entre ambos, cuando los encontraron en el trayecto del recorrido que estaban realizando. Ahora bien, de las comparecencias rendidas ante esta Comisión, por parte de los **CC. PEP5, PEP4, PEP6, PEP2, PEP14, PEP10, PEP7, PEP9, PEP8, PEP13, PEP12, PEP11, PEP23, PEP17, PEP26, PEP21, PEP25, PEP3, PEP16, PEP24, PEP20** y **PEP22**, elementos de la Policía Estatal Preventiva, de la Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas, se desprende que éstos refirieron no haber observado el momento en el que se llevó a cabo la detención de **A1, A2** y **A3**. Motivo por el que desconocen por qué éstos presentan afectaciones a su integridad.

67. Así, respecto a las circunstancias en que se desarrollaron las detenciones de **A1, A2** y **A3**, solamente **PEP15, PEP18** y **PEP19**, elementos de la Policía Estatal Preventiva, de la Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas, quienes fueron los oficiales captores de los agraviados, refieren la manera en que se llevó a cabo su detención. Situación que se presenta también en los autos que integran la Carpeta de Investigación número […].

68. En lo que respecta a la detención de **A1**, de acuerdo a las constancias que integran el presente expediente, se desprende que ésta fue realizada por parte del oficial **PEP18**, elemento de la Policía Estatal Preventiva, de la Secretaría de Seguridad Pública. Ahora bien, del análisis de su comparecencia rendida ante personal de esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, y la versión otorgada por el propio oficial **PEP18**, ante el **AMP1**, Agente del Ministerio Público número uno para asuntos especiales, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas. se advierten una serie de discordancias. Así, mientras ante personal de este Organismo, **PEP18** señaló que un sujeto del sexo masculino, que portaba un arma larga, comenzó a dispararle desde el interior de una finca, por lo que tuvo que repeler la agresión, hasta que salieron otros 3 sujetos de dicho inmueble, a quienes les indicó que se desarmaran, haciendo caso 2 de ellos, momento en que procedió a la detención de **A1**; ante el **AMP1**, Agente del Ministerio Público número uno para asuntos especiales, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, hace mención a que, las 3 personas del sexo masculino obedecieron la orden y se tiraron al suelo, por lo que se procedió a su detención.

69. Por otra parte, el oficial **PEP19**, elemento de la Policía Estatal Preventiva, manifestó ante personal de esta Comisión que, repelió una agresión armada por parte de particulares, observando que uno de ellos corrió y se tropezó, el cual intentó agredirlo nuevamente, pero el arma del particular no funcionó, por lo que el oficial **PEP19**, procedió a la detención de **A2**. Sin embargo, es muy diversa la versión otorgada por este mismo elemento policiaco, ante el **AMP1**, Agente del Ministerio Público número uno para asuntos especiales, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, pues ante la Fiscalía señaló que, después de sufrir una agresión armada, salieron tres personas y colocaron sus armas en el piso, tirándose al suelo, siendo que, en ese momento, él personalmente procedió a la detención de uno de ellos.

70. De lo anterior se desprende que, no hay una correspondencia en las comparecencias del oficial **PEP19**, elemento de la Policía Estatal Preventiva, tanto en la rendida ante personal de esta Comisión, como la realizada ante el personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, ya que una de la otra, distan de ser similares respecto de la detención de **A2**. Puesto que, ante personal de esta Comisión, hace mención a que, **A2** intentó darse a la fuga, ocasionando que éste tropezara, momento en el que es detenido. No obstante, ante el Agente del Ministerio Público, señaló que **A2**, junto con otras 2 personas, accedió a su detención, tirándose al piso y desarmándose. Así pues, se puede afirmar que no hay relación en las comparecencias de **PEP19**, elemento de la Policía Estatal Preventiva, puesto que ante personal de esta Comisión señaló que **A2** impuso resistencia al arresto y, que incluso, trató de agredirlo nuevamente con el arma de fuego, pero ésta no se accionó. Contrario a lo manifestado ante la Fiscalía General de Justicia del Estado, en donde mencionó que los 3 detenidos, se tiraron al piso y aventaron sus armas al suelo.

71. Respecto de la detención de **A3**, el oficial **PEP15**, elemento de la Policía Estatal Preventiva, cae en contradicciones respecto a la versión vertida ante personal de esta Comisión, y la realizada ante el **AMP1**, Agente del Ministerio Público número uno para asuntos especiales, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas. Lo anterior, debido a que, en la comparecencia rendida ante personal de este Organismo, señaló que la detención se realizó posteriormente a que una persona del sexo masculino salió corriendo del interior de una bodega, la cual, portaba un arma larga, quien cayó en varias ocasiones, hasta que no pudo levantarse, y fue cuando el oficial **PEP15**, procedió a su detención. Mientras que, en su declaración rendida ante el **AMP1**, Agente del Ministerio Público número uno para asuntos especiales, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, señaló que, salieron 3 personas de un inmueble, quienes se tiraron al piso y se desarmaron, enfocándose en la detención de uno de ellos.

72. Así entonces, se cuenta con dos versiones distintas por parte de los oficiales **PEP15, PEP18** y **PEP19**, elementos de la Policía Estatal Preventiva, de la Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas, respecto de la detención de **A1, A2** y **A3**, siendo estos oficiales los elementos captores de los ahora quejosos. Por un lado, afirman que, tras recibir una agresión armada, éstos salen de la finca y se entregan voluntariamente, desarmándose, procediendo, en consecuencia, a realizar su detención. Por el otro, **PEP19** afirmó en otra declaración, que **A2** intentó darse a la fuga, se cayó y quiso dispararle con un arma, pero como no funcionó, pudo proceder a su detención; asimismo, **PEP15** afirma que **A3** salió corriendo con un arma larga, que se cayó en diversas ocasiones hasta que no pudo levantarse, momento en que procedió a su detención.

73. Si bien, con éstas últimas versiones, los elementos pretender brindar una explicación acerca de las múltiples lesiones que presentan los agraviados, una vez que fueron a disposición de la autoridad ministerial, este Organismo no puede dejar de advertir que, las mismas, no corresponden a afectaciones físicas producidas durante un enfrentamiento armado. Es decir, si bien existen indicios científicos que nos permiten concluir que, los agraviados sí participaron en un enfrentamiento armado con los elementos policíacos, toda vez que sus dictámenes resultaron positivos por presentar residuos de detonaciones de armas de fuego, las afectaciones físicas que éstos presentan, coinciden con los golpes referidos por éstos, es decir, con golpes en la cara, costillas, etcétera, en cuyas declaraciones de los elementos no están presentes.

74. Situación que nos permite advertir que, como lo refirieron **A1, A2** y **A3**, éstos fueron objeto de un uso irracional de la fuerza pública al momento de su detención, por parte, de al menos, los tres oficiales identificados como sus oficiales captores: **PEP15, PEP18** y **PEP19,** elementos de la Policía Estatal Preventiva, de la Secretaría de Seguridad Pública, quienes no proveyeron ante esta Comisión, una explicación creíble para acreditar las afectaciones en la salud de **A1, A2** y **A3**. Por lo cual, se puede presumir que, al momento de la detención de éstos, se hizo un uso excesivo de la fuerza, por parte de **PEP15, PEP18** y **PEP19**.

75. Si bien, en los partes médicos que les fueran practicados a **A1, A2** y **A3,** por parte de personal de la propia Secretaría de Seguridad Pública, se asienta que las lesiones que presentan son atribuidas a personas pertenecientes a un cártel, los dictámenes periciales, dan cuenta de que las mismas tenían menos de 24 horas de evolución, creándose así un indicio de que, las mismas, si pueden ser atribuidas a los elementos policíacos, en las circunstancias señalados por los agraviados.

76. Del parte médico de **A1**, elaborado por el **D1** se desprende que éste presentaba múltiples contusiones en la cabeza, lesiones en el hombro y espalda, así como una herida punzocortante y raspaduras, de las cuales señala que se desconoce su tiempo de evolución, pero que el agraviado afirma que le fueron causadas por el […], perteneciente a un grupo delincuencial. Del parte médico de **A2**, elaborado por el mismo médico, se desprende que éste también presenta raspaduras, contusiones en la cabeza, dolor en hombro y brazos, varias de ellas recientes, pero que refiere son producto de su intento de huir. Finalmente, **A3** presentaba contusiones y hematomas en cara, así como abrasión en la espalda, de dos horas de evolución, motivadas por el intento de éste de huir.

77. Por su parte, de los dictámenes periciales que se les practicaron a **A1, A2** y **A3**, se desprenden las siguientes afectaciones a su salud, con menos de 24 horas de evolución:

- **A1**: equimosis irregular en cara posterior de pabellón auricular izquierdo; área equimótica en región frontal izquierda; área equimótica en región esternal, a nivel manubrio; dos escoriaciones por fricción en región escapular izquierda; equimosis de 40X11 en cara posterior de los tres tercios de brazo derecho y tercio proximal de antebrazo derecho, y equimosis localizada en cara anterior del tercio distal de antebrazo derecho. Las cuales atribuyó a policías estatales.
- **A2:** área equimótico escorativa por fricción, localizada en región infraorbitaria derecha; múltiples equimosis en párpado, masetérica, temporomandibular izquierda y, equimosis de forma irregular en cara anterointerna del tercio medio de muslo izquierdo. Las cuales, atribuyó a elementos de la policía estatal.
- **A3:** Múltiples equimosis de forma irregular color rojo y escoriaciones por fricción, localizadas en área que mide veintitrés por veintiocho (23x28) centímetros, localizada en cara posterior cara articular y hemicara derecha, cubierta por costra hemática; múltiples equimosis de forma irregular color rojo, y escoriaciones por fricción, localizada en un área que mide treinta por veinte (30x20) centímetros, localizada en cara anterior de tórax y región clavicular derecha; múltiples equimosis de forma irregular color rojo, y escoriaciones por fricción, localizadas en un área que mide veintitrés por veintidós (23x22) centímetros, en región escapular e infraescapular derecha, sobre línea media; eritema en forma irregular, que mide nueve por diez (9x10) centímetros, localizada cara anterointerna del tercio medio de muslo izquierdo, y equimosis de forma irregular color morado, que mide dos punto dos por dos punto cinco (2.2x2.5) centímetros, localizada en cara posteriorexterna del tercio superior de la pierna derecha. Todas atribuidas también a la policía estatal.

78. Si bien, en el dictamen médico, se señala que las lesiones presentadas por **A3,** tienen una evolución de entre 1 a 3 días, no pasa inadvertido que, en el parte médico que le fuera practicado por el médico adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública, se señala que éstas presentan 4 horas de evolución. Es decir, para este Organismo, dichas lesiones, toda vez que coindicen en temporalidad, así como debido a la coincidencia existente entre lo narrado por el agraviado acerca de cómo sufrió afectaciones en su integridad física, es viable presumir que éstas fueron producto de un uso excesivo de la fuerza pública en la que se enmarcó la detención de **A3.**

79. Aunado a lo anterior, en posterior certificación médica, que les fuera practicada a los agraviados en fecha 03 de octubre de 2019, por la **D2,** Perito Médico Legista de Servicios Periciales, adscrita a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, se advierte lo siguiente:

- Las equimosis que presenta **A1** en el área del pabellón auricular izquierdo, en la región del manubrio esternal, así como en los brazos izquierdo y derecho, fueron causadas por contusión.
- En relación a las de **A2,** las que presenta en los párpados, en el labio y en el muslo, fueron también producto de una contusión.
- Finalmente, en relación a las lesiones presentadas por **A3** en los párpados, labios, hombros, clavícula, pectorales, y región interescapular izquierda, fueron causadas por una contusión.

80. Es decir, todas las lesiones anteriormente descritas, fueron producto de un objeto externo. Situación que coincide con la narrativa de los diversos golpes que éstos refieren sufrieron durante su detención. Lo que permite a esta Comisión advertir que, los agraviados, fueron privados de su libertad de manera arbitraria, al haber sido objeto de un uso excesivo de la fuerza pública. Lo anterior, toda vez que, la narrativa de los elementos de la policía estatal que intervinieron en los hechos materia de la presente Recomendación, además de ser contradictorios, al referir en un primer momento que estos se entregaron voluntariamente, y con posterioridad, que pretendieron huir, y se cayeron, no dan cuenta de cómo fue la caída, cuántas veces, sobre qué área, ni los golpes que los agraviados recibieron. Mientas que, por el contrario, la narrativa que realizan los agraviados, en múltiples ocasiones, referente a la manera en que fueron golpeados, y en qué partes de su integridad, coincide con las lesiones certificadas, señaladas con una evolución de 24 horas. Es decir, dentro del lapso de tiempo en que éstos ya estaban a disposición de la autoridad.

81. En este sentido, esta Comisión advierte que, si bien la detención de los agraviados fue legal, en un primer momento, ésta se tornó arbitraria cuando los elementos involucrados en su detención, hicieron un uso irracional de la fuerza pública. Pues, no se explica cómo, si en su primera versión refieren que estos se entregaron de manera voluntaria, durante su certificación se haya dado cuenta de múltiples lesiones, que no son propias de un enfrentamiento armado como en el que todos se vieron involucrados, sino que, éstas coinciden con los golpes con los puños cerrados, patadas y armas largas que **A1, A2** y **A3** han descrito a lo largo de sus declaraciones.

82. Por ello, queda establecido en la presente resolución que, en virtud a haberse vulnerado el derecho a la integridad y seguridad personal de **A1, A2** y **A3,** como se observa en los resultados de la presente investigación, sin que la autoridad haya podido demostrar fehacientemente que las lesiones que éstos presentaron se debieron al intento de los agraviados de huir, ya que, ellos mismos señalaron, en sus primeras declaraciones, que éstos se entregaron de manera voluntaria, al darles los comandos verbales correspondientes. Por lo cual, esta Comisión estima arbitraria la detención de los agraviados, si tomamos en consideración las afectaciones a su integridad física que sufrieron, por la serie de técnicas inapropiadas que los elementos desplegaron de manera negligente, a fin de privarlos de su libertad. Ya que, si éstos se encontraban asegurados y desarmados, no existe justificación alguna para que los patearan, les pegaran con los puños cerrados o con las armas.

83. Así las cosas, de la vinculación de las evidencias precisadas, se cuenta con elementos para establecer que **A1, A2** y **A3,** fueron detenidos arbitrariamente por elementos de la policía estatal, en la que aparentemente también participaron, al menos, el Director de Seguridad Pública de Valparaíso, Zacatecas, transgrediéndose con ello sus derechos humanos a la legalidad y seguridad jurídica, así como la libertad personal, consagrados en los artículos 14, párrafo segundo y 16, párrafos primero y quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 9.1 y 9.2; la Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto San José”, 7.1, 7.2, 7.3 y 7.5; Declaración Universal de Derechos Humanos, 3 y 9; Declaración Americana de los Derechos y Deberes del hombre I y XXV y los principios 1, 2, 3, 4, 9 y 10 del Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión, así como el criterio y procedimientos establecidos en el

Protocolo Nacional de Actuación Primer Respondiente; que en términos generales prohíben las detenciones arbitrarias, además establecen la obligación a las personas contra actos ilegales, defender los derechos humanos y hacer todo a su alcance para impedir transgresiones a los mismos.

b) Del derecho a la integridad y seguridad personal, en relación al derecho a no ser objeto de tortura, tratos crueles, inhumanos y/o degradantes.

1. El derecho a la integridad personal consiste en la obligación que tienen las autoridades de respetar las condiciones físicas, psicológicas, sexuales y morales que permiten el desarrollo de las personas, así como en el deber de no someter a nadie a tortura o cualquier otro trato cruel, inhumano o degradante. Es decir, el derecho a la integridad personal implica que nadie puede ser lesionado o agredido física, psicológica, moral o mentalmente.

2. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, señala que en el ámbito doctrinal, normativo y jurisprudencial pueden encontrarse algunos pronunciamientos tendientes a conceptuar el derecho a la integridad personal.[30] Por ejemplo, Reyes Vanegas, refiere que "[Es] el conjunto de condiciones que permiten que una persona pueda gozar de su vida, con la plenitud de las funciones orgánicas y psíquicas" que le son propias.[31] A juicio de Solórzano Betancourt, "el derecho a la integridad personal implica el reconocimiento de la dignidad inherente al ser humano y, por lo tanto, de la preservación física, psíquica, moral y de toda persona, lo cual se traduce en el derecho a no ser víctima de ningún dolor o sufrimiento, físico, psicológico o moral"[32].

3. Ahora bien, en el marco normativo del Sistema Universal de Protección a los Derechos Humanos, el derecho a la integridad personal, se establece en los artículos 3 y 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 7 y 10 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y, en el artículo 2 de la Declaración sobre la protección de todas las formas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Preceptos en que, de manera similar, se establece que todas las personas tienen derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral y que, en correspondencia, nadie debe ser sometido a torturas, ni penas, o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

4. En relación con la regulación del derecho a la integridad personal, en el Sistema Interamericano, éste se encuentra estipulado en el mismo sentido en los artículos 1 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Por su parte, la Corte Interamericana ha señalado que la infracción del derecho a la integridad física y psíquica de las personas, es una clase de violación que tiene diversas connotaciones de grado y que abarca desde la tortura hasta otro tipo de vejaciones o tratos crueles, inhumanos o degradantes, cuyas secuelas físicas y psíquicas varían de intensidad, según los factores endógenos y exógenos que deberán ser demostrados en cada situación concreta.

5. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este derecho se consagra en los artículos 16, 19, 20 y 22, conforme a los cuales nadie puede ser molestado en su persona, familia o domicilio y que, en caso de que alguna persona sea detenida o privada de su libertad, se prohíbe cualquier maltrato, incomunicación, intimidación, tortura, azotes, palos o tormento, dirigido a las personas a quienes se les impute la comisión de un delito. Es decir, ante la detención de una persona, las autoridades deben garantizar que éstas sean tratadas humanamente, con el debido respeto a su dignidad e integridad física.

6. Finalmente, en el ámbito jurisprudencial el derecho de mérito ha sido igualmente analizado y conceptuado, y ejemplo de ello constituye lo manifestado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el dictamen formulado en la facultad de investigación 1/2007 en el que precisa lo siguiente: "el derecho a la integridad consiste en la protección de la persona, en su

---

[30] Suprema Corte de Justicia de la Nación, Dignidad humana, derecho a la vida y derecho a la integridad personal, Serie Derechos Humanos 2, pág. 87.

[31] Ídem, pág. 88.

[32] Ibidem, pág. 88.

ámbito físico, psicológico y moral. Este derecho encuentra justificación en el objeto de protección; el ser humano; y por ende, en su naturaleza específica y dignidad inherente"; así como que la protección a dicho derecho se extiende "a cualquier acto infligido en menoscabo físico, psíquico y moral de las personas", de forma que a través de él "se salvaguarda un trato digno y decoroso a las personas, respetuoso de su naturaleza, prohibiéndose cualquier atentado a su integridad, principalmente, aquéllos actos vejatorios, denigrantes, crueles e inhumanos, ocasionados por las autoridades con ánimo de intimidación, castigo, investigación o cualquiera que sea el objeto que se pretenda"[33]

7. Según este cúmulo de instrumentos, toda persona privada de libertad, será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano y los estados tienen la obligación de tomar medidas efectivas para prevenir, investigar y sancionar la comisión de cualquier acto que lesione su dignidad humana o su integridad personal.

8. El derecho a la integridad personal protege a la persona desde diversos ámbitos y en ese tenor, se conforma por los siguientes derechos específicos:[34] derecho a la integridad física, derecho a la integridad psíquica y derecho a la integridad moral.

9. Al respecto, el derecho a la integridad física: en opinión de Canoso Usera: "son el cuerpo y la apariencia física los aspectos que a través de él se protegen"[35] de modo que se trata de un derecho que salvaguarda "la incolumidad corporal, así como el derecho a la salud física y mental, el bienestar y a la propia apariencia."[36] En ese sentido, Reyes Vanegas, refiere que "en el aspecto físico, la integridad personal hace referencia a la conservación del cuerpo humano en su contexto anatómico y al equilibrio funcional y fisiológico de los diferentes órganos", y añade que este derecho protege la integridad física de las personas de ataques injustos contra el cuerpo o la salud, que produzcan incapacidad para trabajar o para desplazarse, o que le causen enfermedad, deformaciones físicas o mutilación a cualquiera de sus miembros.[37]

10. Por su parte, el derecho a la integridad psíquica, a juicio de Sar Suárez, se refiere a la preservación de todas las capacidades de la psíquis humana, que incluyen las habilidades motrices, emocionales e intelectuales.[38] Asimismo, Reyes Vanegas refiere que, en lo concerniente al "ámbito psicológico del ser humano, la integridad personal se entiende como la preservación total y sin menoscabo de la psiquis de una persona. Es decir, de las plenas facultades mentales propias de su actividad cerebral, tales como la razón, la memoria, el entendimiento, la voluntad, etc."[39]

11. En referencia al derecho a la integridad moral, en opinión de Olmedo, la nota esencial de la integridad "es que la persona en cuanto tal, posee un dimensión espiritual y valorativa que la diferencia de los animales y las cosas y que se ve menoscabada, cuando aquélla es tratada como si fuera un simple objeto."[40] De igual forma, Barquín Sanz refiere que, la integridad moral constituye "una nota inseparable del ser humano, que apunta a su voluntad y a su conciencia, a su capacidad para decidir por sí mismo y no ser tratado como una cosa", y que se ve afectada "cuando la persona es objeto de humillación, de vejación, de envilecimiento, lo que puede suceder tanto de forma conjunta con el atentado contra otros valores, como de forma independiente."[41]

12. Por su parte, Reyes Vanegas refiere que, en el aspecto moral, "la integridad se refiere a la capacidad y a la autonomía del individuo para mantener, cambiar y desarrollar sus valores personales" y agrega que "cualquier tipo de atentado que humille y agreda moralmente a una

---

[33] Íbidem, pág. 90.
[34] Íbidem, pág. 102.
[35] Íbidem, pág. 103.
[36] Íbidem, pág. 103.
[37] Íbidem, pág. 103.
[38] Íbidem, pág. 105.
[39] Íbidem, pág. 105.
[40] Íbidem, pág. 107.
[41] Íbidem, pág. 108.

persona, como los insultos, la trata de personas, la prostitución o las violaciones carnales, puede comprometer no sólo la dimensión física y psicológica de un individuo, sino también la dimensión moral del mismo".[42]

13. En ese contexto, tanto la legislación interna como la internacional, prohíben la tortura y la ejecución de otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, estableciendo que nadie será sometido a tortura o a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Ya que con dichos actos se causan graves daños y se lesiona el derecho a la integridad personal, pues esta es una de las formas más graves, con la cual se anula o aniquilan la capacidad y valores personales, que dignifican al ser humano.

14. La Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes, (ratificada el 23 de enero de 1986) señala en su artículo 1, que "se entenderá por el término tortura *todo acto por el cual se inflija intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o su aquiescencia."*

15. La Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, (ratificada el 22 de junio de 1987) define la tortura, en dos hipótesis, como: *"todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflijan a una persona, penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin.*" Se entenderá también como Tortura "*la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental, aunque no se causen dolor físico o angustia psíquica. No estarán comprendidos en el concepto de tortura las penas o sufrimientos físicos o mentales que sean únicamente consecuencia de medidas legales o inherentes a éstas, siempre que no incluyan la realización de los actos o la aplicación de los métodos a que se refiere el presente artículo". [43]*

16. La Declaración sobre la Protección de Todas la Personas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (adoptada el 9 de diciembre de 1975). Establece en su Artículo 1, que se entenderá por tortura "*todo acto por el cual un funcionario público, u otra persona a instigación suya, inflija intencionalmente a una persona penas o sufrimientos graves, ya sean físico o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero, información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido o de intimidar a esa persona o a otras*." Así mismo refiere en su Artículo 2 que, "*La tortura constituye una forma agravada y deliberada de trato o pena cruel, inhumano o degradante. Todo acto de tortura u otro trato o pena cruel, inhumano o degradante constituye una ofensa a la dignidad humana y será condenado como violación de los propósitos de la Carta de las Naciones Unidas y de los derechos humanos y libertades fundamentales proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos".*

17. El Protocolo de Actuación para quienes imparten Justicia en Asuntos que involucren Hechos constitutivos de Tortura y Malos Tratos, señala que, conforme a las definiciones convencionales de Tortura emitidas por la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de la ONU y de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, se desprenden los siguientes elementos:

1) Acto intencional: (requisito inicial), consistente en conocer y querer, en quien comete la tortura.
2) Finalidad: se refiere a los propósitos perseguidos por quien comete el acto de tortura.
3) Gravedad del daño: (requisito característico de la definición) las penas o sufrimientos (físicos o mentales) deben ser de la suficiente intensidad como para determinar que efectivamente hay una afectación grave a la integridad

[42] Íbidem, pág. 108.

[43] Art. 2 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.

física o moral de las personas.

4) Sujeto activo calificado: para que la Tortura pueda calificarse como una violación del derecho humano a la integridad personal debe ser cometida por un funcionario del Estado o por un particular, mediando la colaboración aquiescencia de algún funcionario público.
5) Carácter absoluto de la prohibición: la Tortura no se justifica en ningún caso, ni siquiera en circunstancias excepcionales.
6) No eximente de responsabilidad, ni causas de justificación: atendiendo al carácter absoluto de la prohibición de Tortura, no deben existir causales eximentes de responsabilidad de ninguna naturaleza.
7) Crimen internacional: esta categoría jurídica se deriva del objeto y fin del tratado, en el que se expone elementos relacionados con la jurisdicción de los Estados para la sanción del crimen (Considerando el factor territorial, así como la nacionalidad del sujeto activo y del sujeto pasivo).

18. De conformidad al criterio de la CrIDH en los casos Inés Fernández Ortega vs. los Estados Unidos Mexicanos (sentencia de fecha 30 de Agosto de 2010, pfo 120) y Valentina Rosendo vs. los Estados Unidos Mexicanos (sentencia 31 de Agosto de 2010 pfo. 110) se ha señalado que se está frente a un acto de tortura, cuando el maltrato cumple con los siguientes requisitos: 1) es intencional; 2) Causa dolores o sufrimientos físicos o psicológicos; y 3) Se comete con determinado fin o propósito. No obstante, el criterio esencial en la Jurisprudencia desarrollada por esa CrIDH para distinguir la tortura de los malos tratos, radica en la intensidad del sufrimiento[44], precisando que: la "intensidad" del sufrimiento es relativa y requiere un análisis caso a caso, que contemple todas las circunstancias, incluyendo la duración del trato, las secuelas físicas y psicológicas[45], y el sexo, edad, estado de salud de la víctima, entre otros factores[46].

19. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha definido que el alcance del derecho a la integridad personal "tiene diversas connotaciones de grado y que abarca desde la tortura hasta otro tipo de vejámenes o tratos crueles, inhumanos o degradantes, cuyas secuelas físicas y psíquicas varían de intensidad según los factores endógenos y exógenos".[47]

20. De igual forma, el Comité contra la Tortura, al hacer un análisis de la tipificación de los delitos de tortura y malos tratos, señala que "*en comparación con la tortura, los malos tratos difieren en la gravedad del dolor y el sufrimiento y no requieren la prueba de fines inaceptables*"[48].

21. En el caso específico que nos ocupa, **Q1+**, refirió que **A1, A2** y **A3**, fueron detenidos por parte de elementos de la Policía Estatal Preventiva, de la Secretaría de Seguridad Pública, en la comunidad de El […], Valparaíso, Zacatecas, en donde, posteriormente, se suscitó un enfrentamiento armado entre los elementos de dicha corporación policiaca y otras personas. Asimismo, manifestó que, durante su detención, **A1, A2,** y **A3**, fueron golpeados en diversas partes de su cuerpo por los elementos de la Policía Estatal Preventiva, de la Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas.

En relación a A1.

22. Al respecto, **A1**, en su comparecencia rendida ante personal de esta Comisión, manifestó que, al dirigirse de la Comunidad de El […] a […], fue detenido en compañía de **M1**, por parte de elementos de la Policía Estatal Preventiva, específicamente por el **PEP1+** y el **PEP27**, quienes lo comenzaron a golpear con la culata de las armas, con los puños cerrados y a patadas, colocándole el arma en su boca y preguntándole respecto a unas camionetas. Refiere también que el **PEP1+**, lo cuestionó respecto a si la camioneta en la que circulaba era robada, señalando **A1** que no, mostrando en ese momento el título del vehículo, mismo que fue retenido por dicho comandante.

---

[44] Corte IDH, caso Caesar vs. Trinidad y Tobago, op. cit. Párr. 50

[45] ONU. HRC, caso Basongo Kibaya vs. República Democrática del Congo. Comunicación No. 1483/2006, párr. 23.

[46] Corte IDH, caso de los Hermanos Gómez Paquiyouri Vs Perú, op. cit. Párr. 113.

[47] Corte IDH, caso Loaysa Tamayo vs. Perú. Sentencia del 27 de noviembre de 1998. Serie C No. 42, párr. 52.

[48] Protocolo de Actuación para quienes imparten Justicia en asuntos que involucren Hechos constitutivos de Tortura y Malos Tratos.

23. Continuó manifestando **A1** que, fue esposado de sus manos, siendo subido a la cabina de la patrulla y pisado por elementos de la Policía Estatal Preventiva. Señaló que, aproximadamente 11 minutos después, escuchó detonaciones de armas de fuego, sin que éste pudiera ver nada, ya que se encontraba boca abajo en el piso de la patrulla. Manifestó que las detonaciones duraron alrededor de 5 minutos, escuchando que habían matado al comandante. Menciona que, posterior a ello, fue bajado de la patrulla, siendo aventado al pasto, en donde fue golpeado por parte de 6 o 7 elementos. Asimismo, señaló que, el **PEP27**, hizo detonaciones junto a su oído, apuntando al suelo.

24. Por su parte, **PEP18**, elemento de la Policía Estatal Preventiva, en su declaración vertida ante personal de esta Comisión, manifestó que, encontrándose en la Comunidad de El […], Valparaíso, Zacatecas, por el lado izquierdo de una finca, observó a un sujeto del sexo masculino, con un arma de fuego larga, señalándole que la tirara al piso, sin embargo, éste comenzó a dispararle, por lo que, repelió la agresión. Posteriormente, señaló que observó que salieron otros 3 sujetos de la finca, haciéndoles comandos verbales para que se desarmaran, obedeciendo ésto solo 2 de ellos, procediendo al aseguramiento de una de esas personas, que corresponde a **A1**, llevándolo a la unidad, mientras que la otra persona que obedeció el comando verbal, fue asegurado por parte de otro elemento de la Policía Estatal Preventiva, de la Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas.

25. En ese sentido, de las constancias que integran la Carpeta de Investigación […], se desprende la comparecencia realizada por parte de **PEP18**, elemento captor de **A1**, rendida ante el **AMP1**, Agente del Ministerio Público número uno para asuntos especiales, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, en donde manifestó: "*[…] cuando dejaron de escucharse los disparos, salen tres personas del sexo masculino, los cuales salieron con las armas de fuego tirándolas al piso por lo que al ver esto me acerco con las medidas de seguridad necesarias hacia ellos pidiéndoles que se tiren al piso, acatando la orden y los tres se tiraron al suelo con las manos en la nuca […]*".

26. Además, se cuenta con el certificado médico expedido por el **D1**, médico de guardia en la Policía Estatal Preventiva, de fecha 01 de octubre de 2019, a las **20:55** horas, en el cual, al momento de la exploración física de **A1**, presentó las siguientes lesiones:

> "*Presenta múltiples contusiones en cabeza, se desconoce el tiempo de evolución y el mecanismo de producción ya que el paciente refiere múltiples lesiones, dentro de ellas refiere agresión por parte de una persona a la cual nombra […] de un cartel. Presenta múltiples raspaduras en hombro derecho, así como lesión en espalda tipo abrasiones de 2x1 recientes, con misma situación anterior, presenta herida por punzocortante en brazo izquierdo paciente refiere causa lesión con navaja por mismo sujeto. Presenta múltiples raspaduras antiguas en ambas piernas, el paciente refiere patadas por caballo en pierna derecha, así como raspones producidos por su trabajo" (sic).*

27. De igual forma, se cuenta con el certificado médico realizado a **A1,** expedido por parte de la **D3**, Perito Médico Legista, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, de fecha 01 de octubre de 2019, a las **22:01** horas, en el cual señala que, al momento de la exploración física, **A1** presentaba las siguientes lesiones:

> Antecedentes: Refiere agresión física por parte de elementos de la policía estatal preventiva
> A la exploración física: Refiere dolor intenso en hemitórax izquierdo, así como en cara lateral derecha de hombro.
> Al examen médico presenta las siguientes lesiones.
> 1. Área equimotica de forma irregular color morado, que mide dos por dos punto cinco (2x2.5) centímetros, localizada en región temporomandibular y cara lateral derecha tercio superior del cuello.
> 2. Equimosis de forma irregular color rojo, que mide uno punto cinco por dos (1.5x2) centímetros, localizada en cara posterior de pabellón auricular izquierdo.
> 3. Área equimotica de forma irregular color rojo, que mide cuatro por cuatro punto cinco (4x4.5) centímetros, localizada en la región frontal izquierda.
> 4. refiere dolor intenso en la cara lateral derecha de cuello, así como limitación de los movimientos activos y pasivos del mismo, integrando el diagnóstico clínico de esguince cervical grado II b en escala de Quebec.

> 5. Área equimotica de forma irregular color rojo, que mide tres punto cinco por cinco (3.5x5) centímetros, localizada en la región esternal, a nivel del manubrio.
> 6. Dos escoriaciones por fricción , localizada en un área que mide tres punto cinco por cinco punto tres (3.5x5.3) centímetros, en región escapular izquierda, cubierta por costra hemática roja.
> 7. Múltiples equimosis de forma irregular color rojo y escoriaciones por fricción, localizado en un área que mide cuarenta por once (40x11) centímetros, en cara posterior en los tres tercios de brazo derecho y tercio proximal de antebrazo derecho.
> 8. Equimosis de forma irregular color rojo, que mide dos punto cinco por tres (2.5x3) centímetros, localizada en cara anterior del tercio distal de antebrazo derecho
> 9. Aumento de volumen por edema postraumático de región carpiana y metacarpiana a la altura del dedo meñique derecho.
> 10. Herida en proceso de cicatrización, localizada en un área que mide dos puntos cinco por uno (2.5x1) centímetros, en cara posterior del tercio medio de antebrazo izquierdo datos de infección agregada (material purulento).
> 11. solicito radiografías posteroanterior de tórax óseo, así como anteroposterior y oblicua de mano derecha.
>
> De acuerdo con lo anterior, se puede concluir lo siguiente:
> 1.- Son lesiones que no ponen en peligro la vida
> 2.- Tardan menos de quince días en sanar
> Las lesiones descritas en los números dos(2), tres (3), cinco (5), seis (6), siete (7) y ocho (8), tiene una evolución clínica menor a veinticuatro (24) horas, la lesión número uno(1) de dos a tres días , la lesión cuatro (4) y nueve (9) de uno a tres días, y la lesión número diez (10) de tres a cinco (5) días, todas estas al momento de la revisión.
> 3.- Y se reservan las consecuencias médico legales […]" (sic).

28. Es en ese sentido que, la **D3**, Perito Médico Legista, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, certificó médicamente a **A1**, el día 01 de octubre de 2019, a las 22:01 horas, es decir, 1 hora y seis minutos después de que el **D1**, médico de guardia en la Policía Estatal Preventiva, emitiera el certificado de lesiones de **A1,** tiempo en el que estuvo bajo la custodia de los elementos de dicha corporación policiaca. Por lo que, si solamente presentó las lesiones que asentó el **D1,** quiere decir que, las lesiones de **A1**, fueron provocadas por parte de los elementos bajo los que se encontraba en custodia, o bien, que el médico no asentó de manera correcta las lesiones de **A1.**

29. Así pues, en el certificado médico practicado a **A1**, por parte de la **D3**, Perito Médico Legista, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, se puede apreciar que, dicha galena, señaló que las lesiones descritas en los números dos (2), tres (3), cinco (5), seis (6), siete (7) y ocho (8), tenían una evolución clínica menor a veinticuatro (24) horas.

En relación a A2.

30. Por su parte, **A2** señaló que, el día 01 de octubre de 2019, aproximadamente a las 14:00 horas, se dirigía en compañía de **T1, T3** y **M2**, de la Comunidad de El […] a El Vergel, Valparaíso, Zacatecas, a bordo de un vehículo […], sobre un camino de terracería, en donde observó que se dirigían algunas patrullas de Seguridad Pública de Valparaíso, Zacatecas, así como de la Policía Estatal Preventiva, cerrándole el paso una patrulla de la Policía Preventiva de Valparaíso, Zacatecas. Añadió que, un comandante de la Policía Estatal Preventiva, le ordenó que descendiera del vehículo, haciéndolo y siendo subido a una patrulla de dicha corporación policiaca, en donde los elementos lo comienzan a pisar.

31. Además señaló **A2** que, aproximadamente 1 minuto después, se encontraron con una camioneta que traía una traila, realizando lo mismo que con la persona que la conducía, es decir, le cerraron el paso, bajaron a **A1** de la camioneta y lo subieron a la patrulla en la que él iba. Señaló que observó a **M1**, sin embargo, ya no supo nada de él. Una vez que tanto **A1** como él iban a bordo de la caja de la camioneta, el convoy policial siguió con rumbo a la Comunidad de El […]. Manifestó que, posteriormente, comenzaron a disparar en contra de los elementos de la Policía Estatal Preventiva, observando que el comandante se bajó a disparar y fue cuando lo privaron de la vida.

32. Asimismo, **A2** manifestó que, una vez que concluyó el enfrentamiento armado, los elementos de la Policía Estatal Preventiva lo comenzaron a golpear, al igual que a **A1** y a **A3**, señalando que desconoce en qué momento llegó este último al lugar, propinándoles golpes con el puño cerrado y cachazos en las costillas, colocándolo posteriormente en cuclillas sobre un hormiguero. Momentos después, lo subieron a la patrulla y los continuaron golpeando y amenazando, siendo trasladados a la Ciudad de Zacatecas.

33. En este sentido, **PEP19**, elemento de la Policía Estatal Preventiva, manifestó ante personal de esta Comisión que, una vez que fueron víctimas de una agresión armada por parte de particulares, la repelió y se resguardó de la misma, hasta que escuchó que se detuvo, observando que salieron varias personas del sexo masculino de una bodega, enfocándose en uno de ellos, quien salió corriendo y tropezó, retomando su carrera entre nopales y matorrales; posteriormente, la persona del sexo masculino se detuvo y giró hacia el elemento, apuntándole con un arma larga, por lo que el servidor público de igual forma le apuntó, señalándole que arrojara su arma, sin embargo, hizo caso omiso, y trató de accionarla en su contra, pero el arma no se accionó, por lo que se acercó y realizó la detención de esta persona, correspondiendo a **A2**, trasladándolo a una de las unidades de la Policía Estatal Preventiva, de la Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas.

34. De la misma manera, en las constancias de la Carpeta de Investigación número […], obra declaración rendida por **PEP19**, elemento captor de **A2**, rendida ante el **AMP1**, Agente del Ministerio Público número uno para asuntos especiales, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, en la cual señaló: "*[…] y yo les grité ríndanse, salgan y suelten las armas, por lo que se dejaron de escuchar las detonaciones y en eso salieron tres personas y tiraron al piso sus armas posteriormente se tiraron al suelo poniendo las manos en la nuca, por lo que en eso me acerco a uno de ellos y me aseguro de que no cuente con más armas […]".*

35. Así pues, existen algunas contradicciones en las comparecencias rendidas por el elemento **PEP19**, de la Policía Estatal Preventiva, tanto en esta Comisión, como en la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, puesto que, ante personal de este organismo, manifestó que **A2** salió corriendo de una bodega, hacia la maleza y nopales y tropezó, procediendo posteriormente a su detención. Sin embargo, en la comparecencia rendida ante el **AMP1**, Agente del Ministerio Público número uno para asuntos especiales, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, no señaló que **A2** haya caído al suelo, sino que éste se entregó y se tiró al piso, procediendo así entonces, a su detención.

36. Asimismo, se cuenta con el certificado médico practicado a **A2**, por parte del **D1**, médico de guardia en la Policía Estatal Preventiva, de fecha 01 de octubre de 2019, a las **21:00** horas, en donde se asentó que **A2** presentó las siguientes lesiones:

> *"Presenta múltiples raspaduras en ambos brazos, de cuatro horas de evolución secundario a caída tras tratar de huir, refiere dolor y leve limitación de movimientos de hombro izquierdo secundario a la misma situación.*
> *Presenta múltiples contusiones en cara y cabeza acompañados de edema, SE DESCONOSE EL MECANISMO DE LAS LESIONES que presenta no especifica bien.*
> *Al momento de su valoración este refiere malestares en áreas afectadas".*

37. De igual forma, se cuenta con el certificado médico realizado a **A2,** expedido por parte de la **D3**, Perito Médico Legista, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, de fecha 01 de octubre de 2019, a las **23:07** horas, en el cual se asentó que **A2**, al momento de la exploración física, presentaba las siguientes lesiones:

> "…
> 1.- Aumento de volumen por edema postraumático que mide dos punto cinco por cinco (2.5x5) centímetros, localizada en región parietal sobre la línea media.
> 2.- equimosis de forma irregular color verde, que mide dos por uno punto cinco (2x1.5) centímetros, localizada en párpado inferior derecho.
> 3.- área equimotico escoriativa por fricción color rojo que emite uno punto tres por uno punto tres (1.3x1.3) centímetros, localizada en región infraorbitaria derecha cubierta por costra hemática.
> 4.- múltiples equimosis de forma irregular color rojo, localizadas en 1 a que mide nueve por once (9x11) centímetros, en párpado inferior, meseterica,

> temporomandibular, mentóniana izquierda, acompañadas de un aumento de volumen por edema pos traumático que mide nueve por nueve (9x9) centímetros.
> 5.- área equimotica de forma irregular color amarillo, que mide Siete punto cinco por seis (7.5x6) centímetros, localizada en la cara lateral inferior de abdomen izquierdo.
> 6.- equimosis de forma irregular color rojo, que mide dos por punto cinco (2x0.5) centímetros, localizada en cara posterior del tercio medio de brazo derecho.
> 7.- eritema de forma irregular, que mide nueve por diez (9x10) centímetros, localizada en cara antero interna del tercio medio del muslo izquierdo.
> 8.- equimosis de forma irregular color morado, que mide dos punto dos por dos punto cinco (2.2x2.5) localizada en cara posteroexterna del tercio superior de pierna derecha.
> 9.- solicito radiografías posteroanterior de tórax óseo.
> Consideraciones: se sugiere realizar radiografías mencionadas y posteriormente ser enviadas a este departamento para mediante las mismas ratificar o reclasificar lesiones por lo que este certificado se encuentra sujeto a modificaciones.
> De acuerdo con lo anterior, se puede concluir lo siguiente:
> 1.- Son lesiones que no ponen en peligro la vida
> 2.- Tardan menos de quince días en sanar…"

38. Como se puede observar, la **D3**, Perito Médico Legista, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, certificó médicamente a **A2**, el día 01 de octubre de 2019, a las 23:07 horas, es decir, 2 horas y siete minutos después de que el **D1**, médico de guardia en la Policía Estatal Preventiva, emitiera el certificado de lesiones de **A2**, tiempo en el cual, permaneció bajo custodia de los elementos de la referida corporación, lo que significa que, las lesiones señaladas, fueron provocadas por parte de los elementos bajo los que se encontraba en custodia. Además de ello, en el certificado médico practicado a **A2**, por parte de la **D3**, Perito Médico Legista, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, se asentó que las lesiones descritas en los números tres (3), cuatro (4), seis (6) y siete (7), tenían una evolución clínica menor a veinticuatro (24) horas.

Respecto a A3.
39. Por su parte, **A3** manifestó que, el día 01 de octubre de 2019, se dirigía a bordo de una motocicleta, de la Comunidad de El […] a […], Valparaíso, Zacatecas, encontrándose a unas patrullas de la Policía Estatal Preventiva, quienes se le atravesaron y lo comenzaron a golpear, subiéndolo a una unidad, siendo conducido a una casa, con un solo cuarto, en donde se encontraban en el exterior 2 camionetas, y ya había muertos. De igual forma, **A3** señaló que, mientras lo golpeaban le decían que lo iban a matar, en virtud a que había fallecido el comandante. Asimismo, manifestó haber recibido patadas en la cara y en el pecho.

40. Al respecto, **PEP15**, elemento de la Policía Estatal Preventiva, señaló en su comparecencia rendida ante personal de esta Comisión que, su participación consistió en que al momento de que los elementos policiacos fueron agredidos con disparos de armas de fuego por parte de particulares desde el interior de una bodega, éste se encontraba en el lado sur o este de dicha construcción, observando que sale corriendo una persona del sexo masculino, refiriéndose a **A3**, el cual cae en varias ocasiones, llevando consigo un arma de fuego, señalándole el elemento que se detuviera y se tirara al piso. En una de las ocasiones en las que cayó al suelo, ya no pudo levantarse, procediendo a su detención.

41. Asimismo, dentro de las copias de la Carpeta de Investigación número […], se cuenta con la comparecencia de **PEP15**, como elemento captor de **A3**, rendida ante el **AMP1**, Agente del Ministerio Público número uno para asuntos especiales, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, en donde el elemento de la Policía Estatal Preventiva, refirió que, "*[…] por medio de comandos verbales se le pide a dicha persona que se entregue y que arroje el arma, es ahí cuando inmediatamente observo que esa misma persona junto con otras dos personas salen y arrojan sus armas, así mismo me acerco a uno de ellos que observo que camina y avanza 2 o tres metros para después tirarse al piso, por lo que el de la voz de manera inmediata y siempre con las seguridades correspondientes me dirijo hacia con él y le pregunto que si estaba bien, por lo que me responde que sí, y ahí es cuando le realizo una inspección […]".*

42. Como se puede observar de ambas declaraciones de **PEP15**, elemento de la Policía Estatal Preventiva, es decir, de la rendida ante personal de esta Comisión y la realizada ante personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, existen diferencias sustanciales en cuanto a la forma en la que se llevó a cabo, puesto que, ante personal de esta Comisión de Derechos Humanos, manifestó **PEP15** que, **A3** cayó en varias ocasiones antes de que fuera detenido. Sin embargo, de la comparecencia rendida por este oficial ante el **AMP1**, Agente del Ministerio Público número uno para asuntos especiales, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, no hace referencia a que **A3** haya sufrido caída alguna, sino a que éste, se tiró al piso para ceder a la detención.

43. Además de lo anterior, se cuenta con el certificado médico practicado a **A3**, por parte del **D1**, médico de guardia en la Policía Estatal Preventiva, de la Secretaría de Seguridad Pública, de fecha 01 de octubre de 2019, a las **20:50** horas, en el cual se establece que **A3,** presentó las siguientes lesiones al momento de su exploración física:

> "Presenta multiples contusiones y hematomas en cara de 4hrs. De evolución secundario a caída de una brecha al tratar de huir, presenta abrasión en espalda por misma situación, tipo raspón, presenta dermoabrasión en pecho paciente lo relaciona con la caída que presento. No refiere agresión física por parte del personal de policía estatal, al momento de mi valoración solo refiere dolor en áreas afectadas" (sic).

44. A su vez, se tiene el certificado médico practicado a **A3**, por parte de la **D3**, Perito Médico Legista, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, de fecha 02 de octubre de 2019, a las **00:03** horas, en el cual se asentó que **A3**, al momento de la exploración física, presentaba las siguientes lesiones:

> "Antecedentes: Refiere agresión física por parte de elementos de la policía estatal preventiva
> A la exploración física: Bajo consentimiento Informado de la persona, se procede a llevar a cabo dicha revisión médica, entra con marcha normal, se observa de conformación no integra debido a las lesiones a las lesiones que presenta de complexión mesomorfa, con mal estado de higiene y aliño personal. Al interrogatorio directo se encuentra consciente, orientado en sus tres esferas, quejumbroso, cooperador, presenta lenguaje congruente y fluido, con buena articulación de palabras. Antecedentes Heredo familiares: carga genética para diabetes Mellitus Línea paterna. Antecedentes Personales patológicos preguntados y negados. No presenta aliento característico Actualmente refiere dolor moderado en hemicara derecha, dolor intenso en hemitorax izquierdo, así como en hombro derecho. Refiere dolor intenso en hemitórax izquierdo, así como en cara lateral derecha de hombro.
> Al examen médico presenta las siguientes lesiones:
> 1. Multiples equimosis de forma irregular color rojo y escoriaciones por fricción, localizadas en área que mide veintitrés por veintiocho (23x28) centímetros, localizada en cara posterior cara articular y hemicara derecha, cubierta por costra hemática.
> 2. Multiples equimosis de forma irregular color rojo, y escoriaciones por fricción, localizada en un área que mide treinta por veinte (30x20) centímetros, localizada en cara anterior de tórax y región clavicular derecha.
> 3. Multiples equimosis de forma irregular color rojo, y escoriaciones por fricción, localizadas en un área que mide veintitrés por veintidós (23x22) centímetros, en región escapular e infraescapular derecha, sobre línea media.
> 4. Eritema en forma irregular, que mide nueve por diez (9x10) centímetros, localizada cara anterointerna del tercio medio de muslo izquierdo.
> 5. Equimosis de forma irregular color morado, que mide dos punto dos por dos punto cinco (2.2x2.5) centímetros, localizada en cara posteriorexterna del tercio superior de la pierna derecha.
> De acuerdo con lo anterior, se puede concluir lo siguiente:
> 1.- Son lesiones que no ponen en peligro la vida
> 2.- Tardan menos de quince días en sanar
> 3.- las lesiones descritas tienen una evolución clínica de uno (1) a tres (3) días, todas al momento de la revisión.
> 4.- Y se reservan las consecuencias medico legales" (sic).

45. Como se puede observar, la **D3**, Perito Médico Legista, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, certificó médicamente a **A3**, el día 02 de octubre de 2019, a las

00:03 horas, es decir, 3 horas y trece minutos después de que el **D1**, médico de guardia en la Policía Estatal Preventiva, emitiera el certificado de lesiones de **A3**, momentos en los que éste permaneció bajo la custodia de los oficiales de dicha corporación policiaca.

46. De igual forma, en el certificado médico practicado a **A3**, por parte de la **D3**, Perito Médico Legista, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, se estableció que, las lesiones descritas tenían una evolución clínica de uno (1) a tres (3) días, todas al momento de la revisión.

Respecto a A1, A2 y A3.

47. Ahora bien, mediante oficio número […], recibido en esta Comisión el 15 de octubre de 2019, el **DPEP1**, otrora Director de la Policía Estatal Preventiva, de la Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas, rindió su informe de autoridad, mediante el cual señaló que los elementos de esa corporación policiaca, realizaron la detención en flagrancia de **A1, A2** y **A3**, el día 01 de octubre de 2019, derivado de los hechos en los cuales perdió la vida el **PEP1+**.

48. Asimismo, **PEP5, PEP4, PEP6, PEP2, PEP14, PEP10, PEP7, PEP9, PEP8, PEP13, PEP12, PEP11, PEP23, PEP17, PEP26, PEP21, PEP25, PEP3, PEP16, PEP24, PEP20** y **PEP22**, elementos de la Policía Estatal Preventiva, de la Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas, fueron coincidentes en sus comparecencias realizadas ante personal de esta Comisión, en señalar que no observaron el momento de la detención de **A1, A2** y **A3**. Por lo que, respecto a ello, solamente se cuenta con la versión rendida a personal de esta Comisión, por parte de **PEP15, PEP18** y **PEP19**, elementos de la Policía Estatal Preventiva, de la Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas, quienes fueron los oficiales captores de **A1, A2** y **A3**.

49. De lo asentado en puntos anteriores, se puede observar que, en sus declaraciones ministeriales, **PEP15, PEP18** y **PEP19**, elementos de la Policía Estatal Preventiva, de la Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas, no hicieron mención a que **A1, A2** y **A3**, hayan presentado caídas al momento de su detención, lo cual, presuntamente les generó lesiones, sino que, manifestaron los elementos captores que, una vez que concluyó el enfrentamiento armado, **A1, A2 y A3**, se entregaron y se tiraron al piso.

50. Además de lo anterior, se puede observar en los certificados médicos recabados el 01 de octubre de 2019, a **A1, A2** y **A3**, por parte del **D1**, médico de guardia de la Policía Estatal Preventiva, las lesiones que son asentadas en los respectivos certificados, son muy limitadas, señalando en ellos que, los propios agraviados, le indicaron haber sufrido caídas, lo cual es contrario a cualquier declaración emitida por **A1, A2** y **A3,** debido a que ni en esta Comisión, ni ante la Fiscalía General de Justicia del Estado, éstos señalaron haber sufrido caídas, sino que, sus lesiones se las atribuyeron directamente a los elementos de la Policía Estatal Preventiva. Sin embargo, en los certificados médicos recabados el 01 y 02 de octubre de 2019, a **A1, A2** y **A3**, por parte de la **D3**, Perito Médico Legista, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, se asentaron diversas lesiones que, por el tiempo de evolución que marca en los mismos certificados, pudieran corresponder a los hechos que señalaron **A1, A2** y **A3** en sus respectivas comparecencias ante esta Comisión, y que también manifestaron ante la **D3**, que fueron producidas por los elementos de la Policía Estatal Preventiva, de la Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas.

51. Al respecto, debe señalarse que, de acuerdo al Relator Especial de Naciones Unidas Sobre la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes[49], a través de su informe, mencionó que, de manera frecuente, los médicos que realizan las valoraciones clínicas a las personas detenidas, suelen ser trabajadores adscritos a las instituciones en donde éstas se encuentran privadas de su libertad, lo cual, compromete su independencia e imparcialidad. Es por ello que, no hay una relación coherente entre las lesiones establecidas por el **D1**, médico de guardia en la Policía Estatal Preventiva, y la **D3**, Perito Médico Legista,

[49] Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Visita a México del Relator Especial de Naciones Unidas sobre la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Abril 21 a Mayo 2 de 2014.

de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, siendo que el primero de estos, fue muy limitado al momento de establecer las lesiones corporales con las que contaban **A1, A2** y **A3**, mientras que, la segunda estableció con precisión y detalle, las lesiones que estos presentaban.

52. Así pues, debe hacerse mención a que, en el ejercicio de sus funciones, el **D1**, médico de la Policía Estatal Preventiva, debe conducirse apegado a la legalidad, con el fin de dar certeza de las lesiones con las que cuentan los detenidos, actuando en todo momento bajo los principios emanados de su profesión y, estableciendo con precisión, las lesiones que pudieran presentar las personas que son detenidas por parte de los elementos de la Policía Estatal Preventiva, de la Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas.

53. Así pues, con la finalidad de determinar si las lesiones con las que contaban **A1, A2** y **A3**, y que denunciaron ante esta Comisión, pudieran constituir actos de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, atribuibles a elementos de la Policía Estatal Preventiva, de la Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas, se solicitó la práctica de un dictamen pericial médico y físico para la investigación y documentación eficaz de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (Protocolo de Estambul), realizándose a **A1, A2** y **A3**, por parte de la **D4**, Perito Médico Legista, y por el **D5**, Perito en Psicología, el cual se analizará a continuación.

Del dictamen pericial médico y físico para la investigación y documentación eficaz de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (Protocolo de Estambul) practicado a A1 y a A2.

54. Así pues, del dictamen pericial médico y físico para la investigación y documentación eficaz de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (Protocolo de Estambul) practicado a **A1,** por parte de la **D4**, Perito Médico Legista, y por el **D5**, Perito en Psicología, se desprende en sus conclusiones, que sí existe relación entre el relato de **A1** y los hallazgos o señas físicos encontrados en él; que éste, actualmente, no padece síntomas o discapacidades consecuencia del presunto maltrato, por lo que no se recomiendan nuevas evaluaciones o cuidados. De igual forma, los peritos manifestaron que sí existe relación entre lo relatado por **A1** y la exploración física de éste, además de que, de los indicios, determinaron que sí existió tortura producida en contra de **A1**.

55. Asimismo, de las conclusiones emitidas en el dictamen pericial médico y físico para la investigación y documentación eficaz de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (Protocolo de Estambul) practicado a **A2**, por parte de la **D4**, Perito Médico Legista, y por el **D5**, Perito Psicólogo, se desprende que sí existe relación entre los hallazgos o señas físicas en **A2**, y el relato de éste. Asimismo, señalaron que, no existen síntomas o discapacidades que siga padeciendo **A2**, como resultado del presunto maltrato, por lo cual, no se recomiendan nuevas evaluaciones y cuidados de éste. Además de ello, los peritos determinaron que sí existe una relación entre los signos físicos y psicológicos observados, y la denuncia formulada por **A2**, al igual que sí existe fundamentación en los indicios clínicos que sustente que éste fue objeto de tortura.

56. Finalmente, del dictamen pericial médico y físico, que le fuera practicado a **A1**, para la investigación y documentación eficaz de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (Protocolo de Estambul), la **D4**, Perito Médico Legista, y el **D5**, Perito en Psicología, arribaron a la conclusión de que sí se encontraron elementos para determinar tortura y malos tratos en contra de **A1**, cometida por parte de los elementos de la Policía Estatal Preventiva, de la Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas. Esto, en virtud a que, de la narrativa que realizó **A1**, y los hallazgos encontrados por los peritos, existe una coherencia y una relación para poder determinar la vulneración al derecho a la integridad y seguridad personal de **A1**.

57. De igual forma, respecto a **A2**, la **D4**, Perito Médico Legista, y el **D5**, Perito Psicólogo, en el dictamen pericial médico y físico para la investigación y documentación eficaz de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (Protocolo de Estambul), en el capítulo de conclusiones, señalan que sí hay elementos para determinar la tortura y malos

tratos en contra de **A2**. A dicha conclusión arribaron los peritos, luego de llevar a cabo un estudio del caso, en donde determinaron la coherencia en la narrativa de **A2**, y los elementos físicos y psicológicos encontrados en éste, lo cual, los llevó a concluir que, **A2** sí fue objeto de tortura por parte de los elementos de la Policía Estatal Preventiva.

58. Ahora bien, es importante recordar que, desde la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, se reconoce universalmente la prohibición absoluta de la tortura como una norma de *ius cogens*, dicho señalamiento sería detalladamente abordado en la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, así como la necesidad de prevenirla en el Protocolo Facultativo de la referida Convención. Por lo que, el dictamen pericial médico y físico para la investigación y documentación eficaz de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (Protocolo de Estambul), es un examen homologado a nivel internacional, que busca determinar si una o más personas, fueron víctimas de tortura.[50]

59. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se pronunció a través de su tesis con número de registro 2016654, en materia Constitucional y Penal, señalando lo siguiente:

> "Época: Décima Época
> Registro: 2016654
> Instancia: Pleno
> Tipo de Tesis: Aislada
> Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
> Libro 53, Abril de 2018, Tomo I
> Materia(s): Constitucional, Penal
> Tesis: P. I/2018 (10a.)
> Página: 338
> TORTURA. MECANISMOS PARA PROBARLA DENTRO DEL PROCESO PENAL EN EL QUE SE DENUNCIA.
>
> La tortura constituye una violación grave a los derechos humanos que debe probarse por las vías legales idóneas para aclarar los hechos, identificar a los responsables, facilitar su procesamiento y obtener reparación para las víctimas. No obstante, al no poder presumirse la actualización de la tortura, es necesaria la práctica de exámenes para acreditarla; sin embargo, no existen criterios unificados a nivel nacional e internacional sobre cómo probar la tortura, ni una certificación para médicos y psicólogos sobre el tema, pero existen diversos instrumentos internacionales que fungen como herramienta para atender potenciales casos de tortura, entre los que se encuentra el **Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes**, conocido coloquialmente como **Protocolo de Estambul**, en el que se recogen parámetros mínimos de examen que pueden ser modulados en cada país, en atención a las particularidades de cada sistema legal y a los recursos técnicos y económicos disponibles. En este sentido, el Protocolo referido constituye una de las vías mediante las cuales puede comprobarse la existencia de tortura, sin que obste la posibilidad de realizar otros exámenes o pruebas que permitan, en su caso, sancionar a los responsables, tales como la mecánica de hechos y de lesiones que resultan de suma importancia, ya que permiten lograr la obtención de información útil a la vez que disminuyen el riesgo de revictimizar a la persona que alega haber sufrido la tortura.
>
> Incidente de inejecución de sentencia 290/2016. Raúl de los Santos Sánchez. 6 de junio de 2017. Unanimidad de once votos en relación con el sentido de la resolución; mayoría de siete votos de los Ministros Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, Alberto Pérez Dayán y Luis María Aguilar Morales respecto de las consideraciones contenidas en esta tesis; votaron en contra: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y Norma Lucía Piña Hernández. Ponente: Eduardo Medina Mora I. Secretario: Etienne Maximilien Alexandre Luquet Farías".

[50] Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes. Protocolo de Estambul. Comisión Nacional de los Derechos Humanos, página 3, julio 2018.

60. Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha manifestado la naturaleza jurídica de los actos de tortura, ello, a través de su tesis con número de registro 2009997, materia constitucional y penal, en la cual señaló:

> "Época: Décima Época
> Registro: 2009997
> Instancia: Pleno
> Tipo de Tesis: Aislada
> Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
> Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I
> Materia(s): Constitucional, Penal
> Tesis: P. XXII/2015 (10a.)
> Página: 234
>
> ACTOS DE TORTURA. SU NATURALEZA JURÍDICA.
>
> De los criterios jurisdiccionales emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se advierte que se está frente a un caso de tortura cuando: (I) la naturaleza del acto consista en afectaciones físicas o mentales graves; (II) infligidas intencionalmente; y, (III) con un propósito determinado, ya sea para obtener una confesión o información, para castigar o intimidar, o para cualquier otro fin que tenga por objeto menoscabar la personalidad o la integridad física y mental de la persona. Al respecto, debe precisarse que la tortura es una práctica proscrita de forma absoluta en nuestro sistema normativo y constitucional, es decir, su prohibición es un derecho humano que no admite excepciones debido a su gravedad y la capacidad de reducir la autonomía de la persona y la dignidad humana a grados ignominiosos y, por ende, su vigencia no puede alterarse ni siquiera durante una emergencia que amenace la vida de la Nación. En ese contexto, si el derecho a la integridad personal comprende, necesariamente, el derecho fundamental e inderogable a no ser torturado -ni a ser sometido a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes-, es dable colegir que la tortura actualiza una categoría especial y de mayor gravedad que impone a los juzgadores hacer un análisis cuidadoso bajo estándares nacionales e internacionales, tanto en su impacto de violación de derechos humanos, como de delito.
>
> Varios 1396/2011. 11 de mayo de 2015. Mayoría de ocho votos de los Ministros José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien reservó su derecho a formular voto concurrente, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Juan N. Silva Meza, Eduardo Medina Mora I., Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Alberto Pérez Dayán y Luis María Aguilar Morales; votó en contra José Ramón Cossío Díaz. Ausentes: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Isidro E. Muñoz Acevedo".

61. En este sentido, se puede apreciar que, de acuerdo a los criterios jurisdiccionales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señala tres elementos para tener certeza que se está ante actos de tortura: "[…] (I) la naturaleza del acto consista en afectaciones físicas o mentales graves; (II) infligidas intencionalmente; y, (III) con un propósito determinado, ya sea para obtener una confesión o información, para castigar o intimidar, o para cualquier otro fin que tenga por objeto menoscabar la personalidad o la integridad física y mental de la persona […]".

62. De igual forma, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, señaló en el Caso Bueno Alves Vs. Argentina, que los elementos constitutivos de la tortura son los siguientes: a) un acto intencional; b) que cause severos sufrimientos físicos o mentales, y c) que se cometa con determinado fin o propósito.[51] Como se puede observar, los elementos son similares a los establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Asimismo, la Corte señala respecto a *la intencionalidad, […]* que los actos cometidos fueron deliberadamente infligidos en contra de la víctima y no producto de una conducta imprudente, accidente o caso fortuito.[52] Respecto a la finalidad, indica que, la Corte ha considerado que en términos generales, […] la tortura, persigue, entre otros, los fines de intimidar, degradar, humillar,

---

[51] Caso Bueno Alves Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C No. 164, párr. 79
[52] Ídem.

castigar o controlar a la persona que la sufre.[53] En relación al *sufrimiento [se debe]* apreciar la severidad del sufrimiento padecido, la Corte debe tomar en cuenta las circunstancias específicas de cada caso, teniendo en cuenta factores endógenos y exógenos. Los primeros se refieren a las características del trato, tales como la duración, el método utilizado o el modo en que fueron infligidos los padecimientos, así como los efectos físicos y mentales que éstos tienden a causar. Los segundos remiten a las condiciones de la persona que padece dichos sufrimientos, entre ellos la edad, el sexo, el estado de salud, así como toda otra circunstancia personal.[54]

63. Así pues, respecto al primer elemento señalado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual, coincide con el segundo supuesto señalado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, referente a que la naturaleza del acto consista en afectaciones físicas o mentales graves, por lo que, se cuentan con evidencias que hacen ver que, **A1** y **A2**, no resultaron con afectaciones físicas y mentales de gravedad, puesto que dicha gravedad, no se desprende de lo señalado por parte de la **D4**, Perito Médico Legista, y el **D5**, Perito Psicólogo, en el dictamen pericial médico y físico para la investigación y documentación eficaz de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (Protocolo de Estambul).

64. Asimismo, respecto al segundo elemento establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el que coincide con el primer elemento señalado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, referente a la intencionalidad del acto, se debe determinar que, las afectaciones físicas y psicológicas de **A1** y **A2**, son fruto de la intencionalidad con las que fueron infringidas por parte de los elementos de la Policía Estatal Preventiva, de la Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas, puesto que dichas lesiones fueron provocadas con la intención de menoscabar a **A1** y **A2**, aún y cuando estos, ya se encontraban sometidos por parte de los elementos policiacos, de acuerdo a los elementos previamente plasmados en esta Recomendación, y que aquí se dan por reproducidos.

65. Ahora bien, en relación al tercer elemento indicado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el cual se refiere a que los actos cometidos sean con un propósito determinado, ya sea para obtener una confesión o información, para castigar o intimidar, o para cualquier otro fin que tenga por objeto menoscabar la personalidad o la integridad física y mental de la persona, se cuenta que los actos motivo de la presente recomendación, fueron realizados con la finalidad de castigar a **A1** y **A2**, en virtud a que, se presentó un enfrentamiento armado, en donde perdiera la vida el **PEP1+**, además de otras dos personas, que se encontraban en el lugar.

66. Así pues, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señaló lo siguiente a través de su jurisprudencia publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, en marzo de 2014, Tomo II, Pág. 1475, Registro 2005898, Materia Laboral:

> “PRUEBA PERICIAL EN MATERIA LABORAL. SU APRECIACIÓN POR LA JUNTA RESPECTO A SU VALOR PROBATORIO.
> Conforme al artículo 841 de la Ley Federal del Trabajo, vigente hasta el 30 de noviembre de 2012, las Juntas de Conciliación y Arbitraje dictarán sus laudos a verdad sabida y buena fe guardada, apreciando los hechos en conciencia, dentro los límites fijados en la Litis, sin necesidad de sujetarse a reglas o formulismos sobre estimación de las pruebas, pero expresando los motivos y fundamentos legales en que se apoyen. De ahí que se será legal la determinación de la Junta que resta eficacia demostrativa a las opiniones técnicas vertidas en un procedimiento laboral, respecto a una determinada rama de la ciencia, cuando consideren que están en desacuerdo con una interpretación lógica y existe en autos otros elementos de convicción que conducen a desestimar esas opiniones; o bien, cuando estime que no reúne los requisitos necesarios para ilustrar su buen juicio. Sin que se encuentre obligada a ceñirse a lo señalado por un dictamen o por la mayoría de los peritos, ya que los expertos sólo orientan y auxilian a la autoridad juzgadora, pero no la obligan con su opinión, pues quien resuelve es el

[53] Caso Rosendo Cantú y otra Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, supra, párr. 117.
[54] Caso Bueno Alves Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C No. 164, párr. 83

> órgano jurisdiccional, bajo su propio criterio y con la facultad soberana de valorar el acervo probatorio que obre en autos, bajo la lógica y el raciocinio".

67. Como se puede observar, de la tesis que se plasmó en el punto anterior, se desprende que, las opiniones técnicas, plasmadas en los dictámenes, no son el elemento toral de todas las investigaciones, puesto que, si a juicio de quien resuelve, las conclusiones, no corresponden con la interpretación lógica de los autos que integren el expediente, solamente serán un elemento de apoyo, sin estar obligados a ceñirse a lo manifestado en dicho dictamen, como lo es, en el caso que se resuelve, el dictamen pericial médico y físico para la investigación y documentación eficaz de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (Protocolo de Estambul).

68. Entonces, retomando las conclusiones emitidas por la **D4**, Perito Médico Legista, y el **D5**, Perito Psicólogo, en el dictamen pericial médico y físico para la investigación y documentación eficaz de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (Protocolo de Estambul), en donde establecieron que **A1** y **A2**, fueron víctimas de tortura y malos tratos, se debe establecer la distinción jurídica existente entre los distintos tipos de vulneraciones al derecho a la integridad y seguridad personal, como lo son, por una parte, la tortura, y por otra, los tratos crueles, inhumanos y/o degradantes, ya que como lo establece la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la tesis P. I/2018 (10a.), que se plasmó con anterioridad en la presente resolución, el denominado Protocolo de Estambul, es una de las vías para acreditar la comisión de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes.

69. Así pues, atendiendo a lo establecido en el artículo 1, de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, debe entenderse como tortura: "*todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia"*.

70. Asimismo, el artículo 16 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, señala que: "*Todo Estado Parte se comprometerá a prohibir en cualquier territorio bajo su jurisdicción otros actos que constituyan tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y que no lleguen a ser tortura tal como se define en el artículo 1, cuando esos actos sean cometidos por un funcionario público u otra persona que actúe en el ejercicio de funciones oficiales, o por instigación o con el consentimiento o la aquiescencia de tal funcionario o persona".*

71. Además de lo anterior y, retomando lo establecido previamente en la presente resolución, en la que se establece que uno de los requisitos para que un acto sea considerado tortura, debe ser de acuerdo a la gravedad del daño, considerando que estas penas o sufrimientos tienen que ser de la suficiente intensidad como para determinar que hay una afectación grave a la integridad física o moral de las personas. Lo anterior, de acuerdo a lo establecido en el Protocolo de Actuación para quienes imparten Justicia en Asuntos que involucren Hechos constitutivos de Tortura y Malos Tratos, y a las definiciones convencionales de Tortura emitidas por la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de la ONU y de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.

72. Es por ello que, no se deprende de los certificados médicos de **A1** y **A2**, ni del dictamen pericial médico y físico para la investigación y documentación eficaz de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (Protocolo de Estambul), practicado por parte de la **D4**, Perito Médico Legista, y el **D5**, Perito Psicólogo, que las lesiones inferidas a **A1** y **A2** , por parte de los elementos de la Policía Estatal Preventiva, hayan causado un deterioro en su integridad física o psicológica, considerado grave, por lo cual, no se puede determinar que existió tortura, sino tratos crueles, inhumanos y degradantes. Lo cual, lo

anterior no deja de ser una acción reprochable y, a todas luces alevosa, en contra de **A1** y **A2**, vulnerando con ello el derecho a la integridad y seguridad personal de los agraviados.

73. Por lo tanto, en base a los resultados arrojados en los dictámenes periciales médicos y físicos para la investigación y documentación eficaz de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (Protocolos de Estambul), practicados a **A1** y **A2**, aunado a los demás elementos probatorios obtenidos de la investigación realizada por personal de esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, se determina que estos, fueron víctimas de tratos crueles, inhumanos y degradantes, cometidos por parte de los elementos de la Policía Estatal Preventiva, de la Secretaría de Seguridad Pública, el 01 de octubre de 2019.

Del dictamen pericial médico y físico para la investigación y documentación eficaz de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (Protocolo de Estambul) practicado a A3.

74. Ahora bien, respecto a **A3**, en las conclusiones del dictamen pericial médico y físico para la investigación y documentación eficaz de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (Protocolo de Estambul), a las que arribaron la **D4**, Perito Médico Legista, y el **D5**, Perito Psicólogo, manifestaron que sí existió relación entre los hallazgos o señas físicas y el relato de **A3**, las cuales pudieran ser indicativos de tortura. De igual forma, señalaron que sí existen síntomas y signos agudos o discapacidades en **A3**, como resultado de la presunta tortura, por lo que, sí se recomiendan nuevas evaluaciones especializadas para establecer tratamiento médico quirúrgico, en virtud a padecer una hernia inguinal. Además de que, sí se encontró relación entre los signos físicos y psicológicos, con la denuncia formulada por **A3**. De igual forma, los peritos arribaron a la conclusión de que, sí existe relación entre lo relatado y la exploración física de éste, por lo cual, de acuerdo a los indicios clínicos, éstos afirman que **A3** sí fue objeto de tortura.

75. En el mismo sentido, la **D4**, Perito Médico Legista, y el **D5**, Perito Psicólogo, concluyen en el dictamen pericial médico y físico para la investigación y documentación eficaz de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (Protocolo de Estambul), que **A3** fue víctima de tortura y malos tratos, por lo que encontraron elementos suficientes para acreditarlo. Por lo cual, señalaron que sí hay relación y coherencia, entre lo relatado por **A3** y los hallazgos físicos y psicológicos encontrados en éste. Además de que, **A3** sí cuenta con consecuencias clínicas derivadas del hecho denunciado, por lo que, determinaron señalar que éste, sí fue objeto de tortura.

76. Así pues, retomando los criterios jurisdiccionales, emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante los cuales señala tres elementos para tener certeza que se está ante actos de tortura: “[…] (I) la naturaleza del acto consista en afectaciones físicas o mentales graves; (II) infligidas intencionalmente; y, (III) con un propósito determinado, ya sea para obtener una confesión o información, para castigar o intimidar, o para cualquier otro fin que tenga por objeto menoscabar la personalidad o la integridad física y mental de la persona […]”.

77. En relación al primer elemento señalado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual se refiere a que la naturaleza del acto consista en afectaciones físicas o mentales graves, de acuerdo a las conclusiones que arrojó el dictamen pericial médico y físico para la investigación y documentación eficaz de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (Protocolo de Estambul), emitido por parte de la **D4**, Perito Médico Legista, y el **D5**, Perito Psicólogo, practicado a **A3**, se desprende que éste, aún con el paso del tiempo, continúa padeciendo las consecuencias de las lesiones producidas durante su detención, llevada a cabo por elementos de la Policía Estatal Preventiva, de la Secretaría de Seguridad Pública, pues aún en el examen médico que se practicó en **A3**, este cuenta con una hernia inguinal, la cual ha perdurado a través del tiempo.

78. Respecto al segundo elemento que establece la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante el cual señala que las lesiones deben ser infligidas intencionalmente, hay que señalar que, en el caso de **A3,** las afectaciones físicas y psicológicas, fueron producidas con

intencionalidad por parte de los elementos de la Policía Estatal Preventiva, de la Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas, puesto que dichas lesiones fueron provocadas con la intención de menoscabar a **A3**, aún y cuando éste, ya se encontraba sometido por los elementos policiacos.

79. Finalmente, en relación al tercer elemento indicado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual se refiere a que los actos cometidos sean con un propósito determinado, ya sea para obtener una confesión o información, para castigar o intimidar, o para cualquier otro fin que tenga por objeto menoscabar la personalidad o la integridad física y mental de la persona, las afectaciones físicas de **A3,** fueron cometidas con la finalidad de castigarlo, en virtud a que, previamente, se presentó un enfrentamiento armado, en donde perdió la vida el **PEP1+**.

80. Por lo anterior, se debe concluir que, al cumplir con los tres criterios jurisdiccionales que señala la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es que se acredita que **A3**, fue víctima de tortura, cometida por parte de los elementos de la Policía Estatal Preventiva, de la Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas. Por lo cual, se emite la presente recomendación en favor de **A3**, al haberse acreditado, en base al dictamen pericial médico y físico para la investigación y documentación eficaz de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (Protocolo de Estambul), que fue víctima de tortura.

81. Por ello, se puede afirmar que, **A1, A2** y **A3,** fueron vulnerados en su derecho a la integridad y seguridad personal, los primeros dos, en relación al derecho a no ser objeto a tratos crueles, inhumanos o degradantes, mientras que **A3**, referente a su derecho a no ser objeto de tortura; hechos que son atribuidos a los elementos de la Policía Estatal Preventiva, de la Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas, por los argumentos vertidos en la presente recomendación, y que se dan aquí por reproducidos.

VIII. CONCLUSIONES DEL CASO.

1. En la presente Recomendación, se comprobó que existieron violaciones a los derechos humanos de **A1, A2** y **A3**. Siendo **A1** y **A2** vulnerados en su derecho a la integridad y seguridad personal, en relación al derecho a no ser objeto de tratos crueles, inhumanos y degradantes, mientras que **A3**, fue víctima de tortura, cometida por parte de los elementos de la Policía Estatal Preventiva, de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas, en virtud a que, derivado de la investigación realizada por personal de esta Comisión, se determinó, mediante la aplicación del dictamen pericial médico y físico para la investigación y documentación eficaz de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (Protocolo de Estambul).

2. Así mismo, se comprobó la vulneración al derecho a la legalidad y seguridad jurídica, en relación al derecho a no ser objeto de detenciones arbitrarias, de **A1, A2** y **A3**, realizada por parte de oficiales **PEP15, PEP18** y **PEP19**, elementos de la Policía Estatal Preventiva, de la Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas, debido a que, posterior a la legal detención de **A1, A2** y **A3**, los elementos de la corporación policiaca de referencia, haciendo uso excesivo de la fuerza pública, causaron lesiones a los agraviados.

IX. REPARACIONES.

1. De conformidad con lo establecido en los artículos 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 51 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, al acreditarse una violación a los derechos humanos atribuible a un servidor público estatal, la Recomendación formulada al respecto debe incluir las medidas que procedan para lograr la efectiva restitución de las personas afectadas en sus derechos.

2. Dicha reparación, según lo disponen con los *Principios y Directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de*

derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones", adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 2005, las violaciones de derechos humanos deben contemplar, de forma apropiada y proporcional a la gravedad de ésta, una reparación plena y efectiva en las formas siguientes: indemnización, restitución, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, lo cual a su vez es también contemplado por la *Ley General de Víctimas*, en sus artículos 1, último párrafo, 7, fracción I y II, y particularmente en el texto legal del artículo 26, que establece que "Las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera oportuna, plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva por el daño que han sufrido como consecuencia del delito o hecho victimizante que las ha afectado o de las violaciones de derechos humanos que han sufrido, comprendiendo medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y medidas de no repetición", además por lo previsto en el artículo 27 del mismo ordenamiento legal.

3. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que "[la] infracción del derecho a la integridad física y psíquica de las personas es una clase de violación que tiene diversas connotaciones de grado y que abarca desde la tortura hasta otro tipo de vejámenes o tratos crueles, inhumanos o degradantes cuyas secuelas físicas y psíquicas varían de intensidad según los factores endógenos y exógenos que deberán ser demostrados en cada situación concreta"[55], por lo que es de importancia que las víctimas reciban la valoración médica y psicológica necesaria para determinar los daños que sufrieron como consecuencia de la vulneración a sus derechos.

A) De la indemnización.

1. La indemnización es una medida compensatoria que busca reparar los perjuicios económicamente evaluables que sean consecuencia de las violaciones a derechos humanos, entre los que se incluyen: el daño físico o mental; la pérdida de oportunidades, en particular las de empleo, educación y prestaciones sociales; los daños materiales y la pérdida de ingresos, incluido el lucro cesante; los perjuicios morales; los gastos de asistencia jurídica o de expertos, medicamentos y servicios médicos, psicológicos y sociales[56].

2. En el caso motivo de esta Recomendación, es procedente el pago de una indemnización, tanto por los daños materiales como por los inmateriales, que se le han causado a **A1, A2** y **A3**. Asimismo, debe considerarse los gastos que han erogado en asistencia jurídica, atención médica y psicológica. Por lo que, al momento de realizar el cálculo de la indemnización, deberán de tomarse en cuenta esos criterios.

B) De la rehabilitación.

1. Las medidas de rehabilitación buscan reducir los padecimientos físicos y psicológicos de las víctimas, a través del otorgamiento de servicios de atención médica, psicológica, jurídica y social que éstas requieran[57].

2. Es necesario que se le proporcione, de manera gratuita, en caso de que así lo requieran, la atención psicológica especializada que pudieran necesitar **A1, A2** y **A3,** derivado de las violaciones a sus derechos humanos de las cuales fueron objeto. Asimismo, se deberá brindar atención médica, que les asegure un total restablecimiento de su salud, en virtud a los padecimientos generados por la vulneración a su derecho a la integridad y seguridad personal, en relación al derecho a no ser objeto de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, respectivamente. De igual manera, se deberá considerar el otorgar asesoría jurídica gratuita e integral.

---

[55] En el mismo sentido: Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de mayo de 1999, párr 196; Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de octubre de 2012, párr. 147; Caso Morín Catrimán y otros (Dirigentes, miembros y activista del Pueblo Indígena Mapuche) Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de mayo de 201, párr 388).

[56] Numeral 20 de los Principios y Directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, Asamblea General de las Naciones Unidas, 16 de diciembre de 2005.

[57] Ibíd., Numeral 21.

C) De las medidas de satisfacción.

1. Estas medidas contemplan la verificación de los hechos y la revelación de la verdad, así como aplicación de sanciones jurídicas o administrativas a los responsables de las violaciones[58].

2. Por lo anterior, se requiere que la Secretaría de Seguridad Pública, proceda a iniciar, integrar y concluir, investigación administrativa, en contra de los oficiales **PEP15, PEP18** y **PEP19**, elementos de la Policía Estatal Preventiva, quienes fueron los captores de **A1, A2** y **A3**. Así como a los oficiales **PEP5, PEP4, PEP6, PEP2, PEP14, PEP10, PEP7, PEP9, PEP8, PEP13, PEP12, PEP11, PEP23, PEP17, PEP26, PEP21, PEP25, PEP3, PEP16, PEP24, PEP20** y **PEP22**, quienes participaron en el operativo en el que fueron detenidos **A1, A2** y **A3**.

3. Asimismo, se deberá hacer del conocimiento de la LXIV Legislatura Estatal, respecto de los hechos imputados al **PM1**, en su carácter de Presidente Municipal de Valparaíso, Zacatecas, lo anterior con fundamento en el párrafo segundo, del artículo 39, de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas.

4. De igual forma, se dé vista de ésta al Órgano Interno de Control o, en su caso, a la Contraloría Municipal del Ayuntamiento de Valparaíso, Zacatecas, para que inicie el procedimiento administrativo de responsabilidad correspondiente, en contra del **PM1**, Presidente Municipal de Valparaíso, Zacatecas.

D) De las Garantías de no repetición.

1. Son aquellas que se adaptan con el fin de evitar que las víctimas vuelvan a ser objeto de violaciones a sus derechos y para contribuir a prevenir o evitar la repetición de actos de la misma naturaleza.
2. Resulta indispensable que, el Secretario de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas, ordene se capacite a los oficiales **PEP15, PEP18** y **PEP19**, **PEP5, PEP4, PEP6, PEP2, PEP14, PEP10, PEP7, PEP9, PEP8, PEP13, PEP12, PEP11, PEP23, PEP17, PEP26, PEP21, PEP25, PEP3, PEP16, PEP24, PEP20** y **PEP22**, respecto del derecho a la legalidad y seguridad jurídica, en relación con el derecho a no ser objeto de detenciones arbitrarias, además de realizar especial énfasis en la capacitación respecto al derecho a la integridad y seguridad personal, en relación al derecho a no ser objeto de tortura, tratos crueles, inhumanos y/o degradantes. Asimismo, se capacite al **D1**, en relación a la debida certificación y llenado del certificado de lesiones, en el cual, se debe especificar claramente, cada una de ellas, remitiendo a esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, las constancias con que se acredite su cumplimiento.

3. Asimismo, es indispensable, el establecimiento de un protocolo por parte del área médica de la Secretaría de Seguridad Pública, para certificar médicamente a las personas que son detenidas por parte de los elementos de la Policía Estatal Preventiva, de la Secretaría de Seguridad Pública, considerando implementar la videograbación con audio, de las certificaciones médicas.

4. De igual forma, resulta de trascendental importancia que, el **PM1**, Presidente Municipal de Valparaíso, Zacatecas, se capacite en el derecho de acceso a la justicia, en relación al debido proceso y derecho a la verdad, en virtud a haber ocultado información a esta Comisión, y haber obstruido la investigación, incidiendo directamente en el esclarecimiento de los hechos y, en consecuencia, en el encubrimiento de posibles responsables de violaciones a derechos humanos. Asimismo, a los elementos de la Dirección de Seguridad Pública municipal, se les capacite en cuanto al derecho a la integridad y seguridad personal, en relación al derecho a no ser objeto de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, en el derecho a la legalidad y seguridad jurídica, en relación a no ser objeto a detención arbitraria, y en el derecho de acceso a la justicia, en relación al debido proceso y al derecho a la verdad.

---

[58] Ibíd., Numeral 22.

X. RECOMENDACIONES.

Por lo anterior, y con fundamento en los 1 y 102 apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 2, 3, 4, 8, 17, 37, 51, 53, 54, 56, 57 y 58 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas se emiten las siguientes Recomendaciones:

PRIMERA. En un plazo máximo de 1 mes, posterior a la notificación de esta Recomendación, se inscriba en el Registro Estatal de Víctimas a **A1, A2** y **A3,** en calidad de víctimas directas de violaciones a derechos humanos, a fin de que tengan acceso a los servicios y al Fondo de Atención previsto en la Ley de Atención a Víctimas del Estado de Zacatecas; remitiendo a esta Comisión Estatal, las constancias con que se acredite su cumplimiento.

SEGUNDA. Dentro del plazo máximo de un mes, contado a partir de la aceptación de esta Recomendación, se valore y determine proporcionar a **A1, A2** y **A3,** víctimas directas, la atención médica y psicológica necesaria, en caso de que éstos lo acepten y, de ser el caso, otorgarles el tratamiento y la terapia que requieran, además, que ésta sea gratuita, hasta que alcancen su total sanación física, psíquica y emocional. Asimismo, se otorgue la asistencia jurídica necesaria a las víctimas directas **A1, A2** y **A3**.

TERCERA. Dentro de un plazo máximo de un mes, contado a partir de la aceptación de esta Recomendación, se instruya al Órgano Interno de Control y/o a la Unidad de Asuntos Internos, para que realice el procedimiento interno de responsabilidad administrativa que corresponda en contra de los oficiales **PEP15, PEP18** y **PEP19**, elementos de la Policía Estatal Preventiva, quienes fueron los captores de **A1, A2** y **A3**. Así como a los oficiales **PEP5, PEP4, PEP6, PEP2, PEP14, PEP10, PEP7, PEP9, PEP8, PEP13, PEP12, PEP11, PEP23, PEP17, PEP26, PEP21, PEP25, PEP3, PEP16, PEP24, PEP20** y **PEP22**, quienes participaron en el operativo en el que fueron detenidos **A1, A2** y **A3**, a fin de determinar la responsabilidad respectiva y las sanciones específicas a que se hayan hecho acreedores los citados servidores públicos que vulneraron los derechos humanos de **A1, A2** y **A3**.

CUARTA. En un plazo máximo de un mes, contado a partir de la aceptación de la presente Recomendación, se dé vista a la LXIV Legislatura del Estado, de acuerdo con el contenido del párrafo segundo, del artículo 39, de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, con relación a los hechos cometidos por el **PM1**, Presidente Municipal de Valparaíso, Zacatecas.

QUINTA. En un plazo máximo de un mes, contado a partir de la aceptación de la presente Recomendación, se dé vista de ésta al Órgano Interno de Control o, en su caso, a la Contraloría Municipal del Ayuntamiento de Valparaíso, Zacatecas, para que inicie el procedimiento administrativo de responsabilidad correspondiente, en contra del **PM1**, Presidente Municipal de Valparaíso, Zacatecas.

SEXTA. En un plazo máximo de un mes, contado a partir de la aceptación de la presente Recomendación, se dé vista de ésta al Órgano Interno de Control o, en su caso, a la Contraloría Municipal, o a la Comisión de Honor y Justicia del Ayuntamiento de Valparaíso, Zacatecas, para que inicie el procedimiento administrativo de responsabilidad correspondiente, en contra de los elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Valparaíso, Zacatecas, que intervinieron en los hechos.

SÉPTIMA. De manera inmediata, remítase copia al **AMP2**, Fiscal del Ministerio Público número dos adscrito a la Unidad Especializada en Investigación del delito de Tortura y otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, para que se integre la presente recomendación, a la carpeta de investigación número […], iniciada con motivo de los hechos de tortura cometidos en contra de **A1, A2** y **A3**, para que se tomen en consideración los argumentos vertidos.

OCTAVA. Dentro del plazo máximo de tres meses, contados a partir de la aceptación de esta Recomendación, la Secretaría de Seguridad Pública, capacite a los oficiales **PEP15,**

PEP18 y **PEP19**, **PEP5, PEP4, PEP6, PEP2, PEP14, PEP10, PEP7, PEP9, PEP8, PEP13, PEP12, PEP11, PEP23, PEP17, PEP26, PEP21, PEP25, PEP3, PEP16, PEP24, PEP20** y **PEP22,** en materia de derechos humanos, específicamente en el derecho a la legalidad y seguridad jurídica, en relación al derecho a no ser objeto de detenciones arbitrarias, así como en el derecho a la integridad y seguridad personal, en relación al derecho a no ser objeto de tortura, tratos crueles, inhumanos y/o degradantes, y en el derecho de acceso a la justicia, en relación al debido proceso y al derecho a la verdad. Asimismo, se capacite al **D1**, en relación a la debida certificación de las lesiones y al llenado de los certificados médicos, en los cuales, se debe especificar claramente cada una de las lesiones; así como en el derecho a la legalidad y seguridad jurídica, remitiendo a esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, las constancias con que se acredite su cumplimiento.

NOVENA. Dentro del plazo máximo de tres meses, contados a partir de la aceptación de esta Recomendación, se capacite a los elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, en materia de derechos humanos, específicamente en el derecho a la legalidad y seguridad jurídica, en relación al derecho a no ser objeto de detenciones arbitrarias, así como en el derecho a la integridad y seguridad personal, en relación al derecho a no ser objeto de tortura, tratos crueles, inhumanos y/o degradantes, y en el derecho de acceso a la justicia, en relación al debido proceso y al derecho a la verdad, remitiendo a esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, las constancias con que se acredite su cumplimiento.

DÉCIMA. Dentro del plazo máximo de tres meses, contados a partir de la aceptación de esta Recomendación, se capacite al **PM1**, Presidente Municipal de Valparaíso, Zacatecas, en el derecho de acceso a la justicia, en relación al debido proceso y acceso a la verdad, específicamente en la obligación de ceñir sus actuaciones y decisiones al principio de legalidad y seguridad jurídica, y en la colaboración que debe tener con este Organismo defensor de derechos humanos, remitiendo a esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, las constancias con que se acredite su cumplimiento.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 53, párrafo segundo de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, se hace del conocimiento de la autoridad a la que va dirigida esta Recomendación, que dispone de un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente en que ésta se le notifique, para que manifieste si la acepta o no, en el entendido de que, de no aceptarla, su respuesta se hará del conocimiento de la opinión pública. En caso de que la acepte, se le notifica que dispone de un plazo de 15 días, contados a partir del vencimiento del término del que disponía para responder sobre la aceptación, a fin de enviar las pruebas de su cumplimiento.

Por último, hágasele saber a los quejosos que, de conformidad con el artículo 61 de la Ley de este Organismo, dispone de 30 días naturales, computados a partir de la fecha de notificación del presente documento, para que en caso de que exista inconformidad con la misma, interponga el recurso de impugnación correspondiente ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Así lo determina y firma

DRA. EN D. MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOS
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE ZACATECAS

Expediente: CDHEZ/176/2019

Persona quejosa: VD

Personas agraviadas:
I. VD
II. A
III. M1.
IV. M2.

Autoridades responsables:
I. AR1, otrora Agente del Ministerio Público, adscrita a la Unidad Especializada en Investigación Mixta, del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas.
II. AR2, Agente del Ministerio Público, adscrita a la Unidad Especializada en Investigación Mixta número VII, del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas.
III. AR3, ex Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de la Presidencia Municipal de Fresnillo, Zacatecas.
IV. AR4, ex Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de la Presidencia Municipal de Fresnillo, Zacatecas.

Derechos humanos vulnerados:
I. Derecho de acceso a la justicia, en relación con el derecho a una justicia pronta y expedita.
II. Derecho de acceso a la justicia en sede administrativa, en relación con el derecho al debido proceso.

Autoridades no responsables:
I. ANR1, actualmente Directora del Centro de Justicia para Mujeres de Fresnillo, Zacatecas.
II. ANR2, Agente del Ministerio Público, adscrita a la Unidad Especializada en Investigación Mixta del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas.
III. ANR3, Agente del Ministerio Público, adscrita a la Unidad Especializada en Investigación Mixta del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas.
IV. ANR4, otrora Jueza Comunitaria de Fresnillo, Zacatecas.
V. ANR5, Agente del Ministerio Público, adscrita a la Unidad Especializada en Investigación Mixta del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas.

Zacatecas, Zacatecas, a 07 de diciembre de 2021, una vez concluida la investigación de los hechos que motivaron el expediente CDHEZ/176/2019, y analizado el proyecto presentado por la Visitaduría Regional de Fresnillo, la suscrita aprobó, de conformidad con los artículos 4, 8 fracción VIII, 17 fracción V, 37, 51, 52 y 56 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, en relación con lo dispuesto por los numerales 161, fracciones VIII, X y X1, 162, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 y 175 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, la **Recomendación 52/2021**, que se dirige a las siguientes autoridades:

- **DR. EN D. FRANCISCO JOSÉ MURILLO RUISECO**, Fiscal General de Justicia del Estado de Zacatecas, por lo que respecta a la violación del derecho de acceso a la justicia en relación con el derecho a una justicia pronta y expedita, atribuida a:
  - ✓ **AR1**, otrora Agente del Ministerio Público, adscrita a la Unidad Especializada en Investigación Mixta, del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas.
  - ✓ **AR2**, Agente del Ministerio Público, adscrita a la Unidad Especializada en Investigación Mixta número VII, del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas.

- **LIC. SAÚL MONREAL ÁVILA**, Presidente Municipal de Fresnillo, Zacatecas, por lo que se refiere a la vulneración del derecho de acceso a la justicia en sede administrativa, atribuida a los siguientes servidores públicos:
  - ✓ **AR3**, ex Director y Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de la Presidencia Municipal de Fresnillo, Zacatecas.
  - ✓ **AR4**, ex Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de la Presidencia Municipal de Fresnillo, Zacatecas.

Así como **Acuerdo de No Responsabilidad,** dirigido a las siguientes autoridades:

- **DR. EN D. FRANCISCO JOSÉ MURILLO RUISECO**, Fiscal General de Justicia del Estado de Zacatecas, por lo que respecta a la violación del derecho de acceso a la justicia en relación con el derecho a una justicia pronta y expedita, atribuida a las siguientes servidoras públicas:
  - ✓ **ANR1**, actualmente Directora del Centro de Justicia para Mujeres de Fresnillo, Zacatecas.
  - ✓ **ANR2**, Agente del Ministerio Público, adscrita a la Unidad Especializada en Investigación Mixta del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas.
  - ✓ **ANR3**, Agente del Ministerio Público, adscrita a la Unidad Especializada en Investigación Mixta del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas.
  - ✓ **ANR5**, Agente del Ministerio Público, adscrita a la Unidad Especializada en Investigación Mixta del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas.

- **LIC. SAÚL MONREAL ÁVILA**, Presidente Municipal de Fresnillo, Zacatecas, por lo que se refiere a la presunta vulneración del derecho de acceso a la justicia en sede administrativa, en relación con el derecho al debido proceso, por hechos atribuidos a:
  - ✓ **ANR4**, ex Jueza Comunitaria de Fresnillo, Zacatecas.

I. DE LA CONFIDENCIALIDAD

1. De conformidad con los artículos 6°, apartado A, fracción II y 16, Apartado A, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 23 y 85 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, los datos personales de los peticionarios y los agraviados que así lo soliciten, relacionadas con esta resolución, permanecerán confidenciales, ya que éstos no son públicos.

II. RELATORÍA DE LOS HECHOS Y OBJETO DE LA CONTROVERSIA.

1. El 02 de mayo de 2019, **VD** presentó queja por sí y en favor de **A, M1** y **M2**, en contra de **AR1**, de **ANR2** y de **ANR3**, respectivamente ex Agentes del Ministerio Público adscritas a la Unidad Especializada en Investigación Mixta número 1 y 2, del Distrito Judicial de Fresnillo, del o la Titular de la Unidad Especializada en Investigación Mixta número 4; así como en contra de **AR3**, y de **ANR4**, respectivamente ex Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas y ex Jueza Comunitaria de Fresnillo, Zacatecas, por actos presuntamente violatorios de sus derechos humanos, de conformidad con los artículos 30, 31 y 32 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas.

Por razón de turno, en esa misma fecha, la queja se remitió a la Visitaduría Regional de Fresnillo, de este Organismo, bajo el número de expediente que al rubro se cita, a efecto de formular el acuerdo de calificación de ésta, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 124 y 125 del Reglamento de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas.

El 06 de mayo de 2019, la queja se calificó como una presunta violación a los derechos humanos, de conformidad con lo establecido por los artículos 124 y 125 del Reglamento de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas.

2. Los hechos materia de la queja consistieron en lo siguiente:
I. **VD** manifestó que, en noviembre de 2016, interpuso denuncia por el delito de lesiones, en contra de **H1** y **H2**, formándose la carpeta de investigación **(…)**, la cual, a la fecha de interposición de la queja, no se había resuelto por la Titular de la Unidad Especializada en Investigación Mixta número IV, del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas.

II. Por otro lado, **VD** manifestó que, en el año 2018, interpuso denuncia en contra de **H1** y **H2**, por el delito de daño en las cosas, iniciándose carpeta de investigación **(…)**, asignada a la Titular de la Unidad de Investigación Mixta número II, del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas. Sin embargo, pese a que **ANR1**, Fiscal encargada de la investigación le indicó (no especificó en qué fecha), que esperara fecha de audiencia, hasta el momento de interponer la queja, no había recibido información relacionada con ello.

III. Asimismo, **VD** señaló que, también en el año 2018, presentó denuncia en contra de quien resulte responsable, por el delito de daño en las cosas, formándose la carpeta de investigación **(…)**, la cual se asignó a **AR1**, Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Investigación Mixta número I, del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas. Misma en la que la Fiscal dictó Determinación de archivo temporal; empero, luego de haberla impugnado, el Órgano Judicial ordenó que se prosiguiera con la investigación.

IV. Por otro lado, **VD** se dolió de que **AR3**, ex Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de la Presidencia Municipal de Fresnillo, Zacatecas, omitió dar seguimiento al trámite que tenía ante esa Dirección, bajo el número de expediente **(…)**, mediante el cual se buscaba determinar si el uso de suelo de la balconería propiedad de **H1** y **H2**, era permitido, prohibido o condicionado.

V. Finalmente, **VD** se dolió del actuar de **ANR4**, otrora Jueza Comunitaria de Fresnillo, Zacatecas, debido a que considera que su actuar fue favoreciendo a **H1** durante visita domiciliaria, llevada a cabo en la balconería propiedad de éste, instalada en propiedad de **DL.**

3. Las autoridades involucradas rindieron los informes correspondientes:

a) En fecha 24 de mayo de 2019, **ANR4**, otrora Jueza Comunitaria de Fresnillo, Zacatecas, rindió informe de autoridad.
b) El 27 de mayo de 2019, **AR3**, ex Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de la Presidencia Municipal de Fresnillo, Zacatecas, rindió informe de autoridad.
c) El 27 de mayo de 2019, **AR1**, ex Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Investigación Mixta número 1 del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas, rindió informe de autoridad, en relación con la integración de las siguientes carpetas:
    - Número **(…)**, de la cual, remitió copias.
    - Número **(…).**
d) El 24 de junio de 2019, **ANR2**, Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Investigación Mixta número 2 del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas, rindió informe en vía de colaboración, al cual adjuntó copia de la carpeta de investigación número **(…).**
e) En fecha 29 de noviembre de 2019, **ANR3**, Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Investigación Mixta número 2, del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas, rindió informe de autoridad, al que adjuntó copias de la carpeta de investigación **(…)**, a la que luego se le asignó número **(…).**
f) El 29 de noviembre de 2019, **AR1**, ex Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Investigación Mixta número 1 del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas, rindió informe de autoridad complementario, al que adjuntó copias actualizadas de la carpeta de investigación **(…).**
g) En fecha 10 de diciembre de 2019, **ANR2**, ex Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Investigación Mixta número 2 del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas, rindió informe relacionado con la carpeta de investigación número **(…).**

h) En fecha 12 de febrero de 2020, **ANR3**, Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Investigación Mixta número 2, del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas, rindió informe relacionado con la carpeta de investigación **(…)**, a la cual posteriormente se le asignó el número **(…).**

III. COMPETENCIA.

1. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas es competente, en términos de los artículos 1º, 4º, 6º, 8º fracción VII, inciso A) y 31 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, en relación con los numerales 15, 22 y 23 de su Reglamento Interno, debido a que la queja se promueve en contra de servidores públicos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, así como de la Presidencia Municipal de Fresnillo, Zacatecas, por hechos ocurridos en 2019.

2. De conformidad con el artículo 124, fracción I del Reglamento Interior de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, este Organismo advierte que, de los hechos materia de la queja, se puede presumir la violación de los derechos humanos de la parte quejosa y agraviada, así como la responsabilidad por parte de los servidores públicos señalados.

3. Esta Comisión acreditó la violación de los siguientes derechos humanos:

a) Derecho de acceso a la justica, en relación con el derecho a una justicia pronta y expedita.
b) Derecho de acceso a la justicia en sede administrativa, en relación con el derecho al debido proceso.

IV. PROCEDIMIENTO ANTE LA COMISIÓN.

Con la finalidad de documentar las presuntas violaciones a derechos humanos, así como para determinar la existencia o no de responsabilidad por parte de las y los servidores públicos señalados, durante el procedimiento de investigación de esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, se entrevistó a las personas relacionadas con los hechos; se solicitaron informes de autoridad y en vía de colaboración; se analizaron informes, diversos documentos y las carpetas de investigación relacionadas con los hechos materia de esta Recomendación.

V. PRUEBAS.

Con base en lo estipulado en los artículos 48 y 49 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, en relación con los numerales 149, 150, 151, 152, 153, 154 y 155 del Reglamento Interior de este Organismo, durante el procedimiento realizado por esta Institución se recabaron los elementos probatorios documentales, remitidos tanto por la parte agraviada como por las autoridades señaladas como responsables, así como documentación, dictámenes e inspecciones necesarios para emitir la resolución correspondiente.

VI. DE LA INCOMPETENCIA DE LA COMISIÓN

1. El artículo 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los organismos de protección de derechos humanos conocerán de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación, que vulneren los derechos humanos reconocidos por el orden jurídico mexicano. En el mismo sentido, el artículo 4º de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, en relación con el numeral 15 de su Reglamento Interno, circunscriben la competencia de ésta a aquellos actos u omisiones administrativos, que además sean imputables a autoridades o servidores públicos de carácter estatal y municipal; y **por lo que hace al Poderes Judicial y autoridades electorales, solo se admitirán o conocerán cuando se trate de actos u omisiones administrativas de carácter procesal que no diriman controversia alguna**.

2. Aunado a ello, el artículo 9° de la Ley Estatal ya señalada y el numeral 25 de su Reglamento Interno, estatuyen de forma coincidente que, esta Comisión, por ningún motivo puede examinar cuestiones jurisdiccionales de fondo, ni mucho menos pronunciarse sobre la culpabilidad o no del procesado, imputado o sentenciado. En cuanto a qué debe entenderse como resolución de carácter jurisdiccional, entre otros, se encuentran los autos y proveídos dictados por el Juez o por el personal del juzgado o tribunal para cuya expedición se haya realizado una valoración y determinación judicial o legal. A lo cual, también se suman aquellas resoluciones de carácter administrativo, que revistan características de jurisdiccionales, como son, en la especie, las determinaciones del Ministerio Público, en el ejercicio de sus funciones.

3. En ese orden de ideas, importa destacar que, el sistema jurídico mexicano, establece dos vías para la defensa de los derechos humanos reconocidos en la Constitución General de la República y los tratados internacionales de los que México es parte. Así como en cualquier otra norma general que, en su conjunto, integran el parámetro de regularidad constitucional; es decir, el cúmulo de derechos que debe tutelar el Estado Mexicano. La primera de estas vías, es de carácter jurisdiccional, y se tramita ante los Órganos del Poder Judicial de la Federación, a través de diversos procedimientos, como el Juicio de Amparo, la Controversia Constitucional y la Acción de Inconstitucionalidad. Mientras que la segunda, corre a cargo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de los Organismos Públicos Locales. Empero, como ya se ha señalado, dichos Organismos ven delimitada su competencia a un acto de autoridad, proveniente de un servidor público federal, estatal o municipal, según sea el caso.

4. Motivo por el cual, de acuerdo a los razonamientos previos, es inatendible analizar actos provenientes de Agentes del Ministerio Público, en los casos en que éstos se asimilan a las ya referidas resoluciones de carácter jurisdiccional. Como es el caso de las determinaciones por medio de las cuales se ordena la abstención de la investigación, un criterio de oportunidad, o, como en el caso ocurrió, el **archivo temporal** de la carpeta de investigación (…). Ya que, para dictar dicha resolución, **AR1**, Agente del Ministerio Público Especializada en Investigación Mixta del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas, realizó un análisis lógico jurídico de los medios de prueba que, hasta ese momento, obraban en dicho legajo.

5. Aunado a ello, el Código Nacional de Procedimientos Penales prevé en su artículo 258, el recurso por medio del cual, dicha determinación, es susceptible de combatirse por la víctima, si se considera agraviada. En el caso de la presente Recomendación, la determinación de archivo temporal aludida, fue notificada a **VD** en fecha 8 de abril de 2019, haciéndole saber su derecho a interponer dicho recurso, lo cual garantizó su derecho al debido proceso, como componente del derecho a la tutela judicial[1].

6. En lo atinente, el propio quejoso manifestó en su escrito de queja que ejerció dicho derecho, pues impugnó tal determinación en fecha 09 de abril de 2019, ante el Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento de este Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas. Lo cual, reiteró en comparecencia de fecha 07 de agosto de 2019, señalando incluso que el Juzgado de Control había ordenado la reapertura de la carpeta de investigación. Razón suficiente para que este Organismo no entre al fondo del asunto, pues, además, como ya se apuntó, la determinación de archivo temporal dictada por la Fiscal, es considerada como análoga a una resolución jurisdiccional y, por ende, escapa al ámbito de competencia de esta Comisión Estatal. Por consiguiente, se hace la aclaración que, en acápites subsecuentes, se realiza el estudio de dicha carpeta, únicamente por lo que respecta a la integración de la misma, primero, por la Fiscal en comento, y luego, por aquellos que la integraron con posterioridad a que se ordenara su prosecución por el Órgano Jurisdiccional.

7. Criterio que resulta igualmente aplicable a la carpeta de investigación **(…)**, a la que se acumuló la respectiva **(…)**, a cargo de **ANR2**, en ese entonces, Agente del Ministerio Público Especializada en Investigación Mixta número 4, del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas. Ya que, como se advierte del informe complementario que ésta rindiera en fecha 10 de diciembre de 2019, así como del informe que, en vía de colaboración rindió **AC1**, Asesor Jurídico de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Zacatecas, la causa penal que se originó con dicha carpeta, está actualmente sobreseída. Pues, como ambos

---

1 SAAVEDRA A., Yuria en *Derechos Humanos en la Constitución, Comentarios de Jurisprudencia Nacional e Interamericana*, Coordinación de Ferrer Mac-Gregor P., Eduardo y otros, México, SCJN, Fundación Konrad Adenauer, UNAM, México, D.F., pág. 1567.

funcionarios detallaron, se firmó acuerdo reparatorio de cumplimiento inmediato, celebrado entre el quejoso y **H1.**

8. Lo anterior, significa que la carpeta de investigación **(…)** fue judicializada y que luego de formularse imputación en contra de **H1**, se resolvió mediante la celebración de una salida alterna al proceso penal; hipótesis prevista en el artículo 184, fracción I del Código Nacional de Procedimientos Penales. Al respecto, es preciso resaltar que el propio Código Adjetivo, prevé en el numeral 185 que, los acuerdos reparatorios, se celebran entre la víctima u ofendido y el imputado; los cuales, pueden ser aprobados por el Ministerio Público o por el Juez, y tiene como consecuencia jurídica la extinción de la acción penal. Entonces pues, dado que, en el caso concreto, dicho acuerdo se celebró ante el Juez de Control del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas, decretando éste el sobreseimiento de la causa penal; se tiene que dicha resolución evidentemente es de carácter jurisdiccional y, por las razones previamente establecidas, resulta inatendible por este Organismo, al escapar de su ámbito competencial.

9. De la misma manera, el criterio en comento es aplicable a la carpeta de investigación **(…)**, originalmente a cargo de **ANR1**, actualmente Directora del Centro de Justicia para Mujeres de Fresnillo, Zacatecas; la cual, posteriormente se registró bajo el número **(…)**, tal y como se desprende del informe de autoridad rendido por **ANR3**, Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Investigación Mixta número 2, del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas, recibido en fecha 12 de febrero de 2020. En dicho informe, la Fiscal especificó que, dicha carpeta, fue judicializada y se registró con el número de causa penal (…), dentro de la cual se celebró audiencia inicial en fecha 15 de enero de 2020. Dicha información, fue también proporcionada por **AC2**, Coordinadora de Unidades de Investigación en Fresnillo, Zacatecas, mediante informe que, en vía de colaboración, rindió en fecha 18 de octubre de 2020. Respecto de lo sucedido en dicha audiencia, se tiene que, el quejoso y las personas imputadas, signaron acuerdo reparatorio de cumplimiento inmediato; lo cual, originó, como en el caso de la carpeta **(…)** el sobreseimiento de dicha causa penal. Consecuentemente, nos encontramos ante el hecho de que la resolución mediante la cual se decretó el referido sobreseimiento, es una resolución de tipo estrictamente jurisdiccional, la cual, como ya se explicó, no es susceptible de analizarse por este Organismo Autónomo. Por lo que, en consecuencia, se resuelve que, al ser un asunto concluido mediante la firma de dicho acuerdo reparatorio, no existe razón jurídica para analizar el actuar de **ANR1**, Fiscal del Ministerio Público que inició dicho legajo de investigación.

10. Bajo esa lógica, este Organismo resuelve, con base en los argumentos anteriormente vertidos, que el actuar de **ANR2**, en ese entonces, Agente del Ministerio Público Especializada en Investigación Mixta número 4, del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas y de **ANR1**, actualmente Directora del Centro de Justicia para Mujeres de Fresnillo, Zacatecas, y que como ya se dijo, deriva de un asunto netamente jurisdiccional, no puede ser causa de reproche y, por lo tanto, se dicta en su favor, con fundamento en el artículo 51 y 52 de la Ley que rige su actuar, **Acuerdo de No Responsabilidad.**

VII. SOBRE LOS DERECHOS VULNERADOS.

A. Derecho de acceso a la justicia, en relación con el derecho a la justicia pronta y expedita.

1. Los derechos humanos son considerados como inherentes a todas las personas. Definen las relaciones entre los individuos y las estructuras de poder, especialmente el Estado. Delimitan el poder del Estado y, al mismo tiempo, exigen que el Estado adopte medidas positivas que garanticen condiciones en las que todas las personas puedan disfrutar de sus derechos humanos[2]. Los derechos humanos aparecen pues, como un conjunto de facultades e instituciones que, en cada momento histórico, concretan las exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad humanas, las cuales deben ser reconocidas positivamente por los ordenamientos jurídicos a nivel nacional e internacional.[3]

2. Con base en ello, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha definido el derecho a una tutela jurisdiccional como: *"el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los*

2 ONU, Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, *Manual para Parlamentarios* número 26, pág. 19.

3 PÉREZ L., Antonio, *Derechos humanos, Estado de Derecho y Constitución*, Tecnos, Madrid, 1984, pág. 84.

plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita, -esto es, sin obstáculos, a tribunales independientes e imparciales, para plantear una pretensión o defenderse de ella, con el fin de que, a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute la decisión"[4]. Luego entonces, el derecho a la tutela jurisdiccional es un derecho genérico que se integra con el derecho al debido proceso, el derecho de acceso a la justicia y la eficacia de la sentencia o decisión obtenida.[5]

3. Consecuentemente, el derecho de acceso a la justicia constituye una prerrogativa a favor de las personas, para acudir y promover ante las instituciones del Estado, la protección de la justicia, a través de procesos de corte judicial o administrativo, que le permitan obtener una decisión en la que se resuelva de manera efectiva sobre sus pretensiones, o los derechos que estime le fueron violentados. Ahora bien, gracias a la dinámica actual del derecho internacional de los derechos humanos, el *corpus iuris* internacional ha permitido establecer diversos aspectos del derecho al acceso a la justicia. De esta manera, hoy en día son varios los instrumentos internacionales, particularmente tratados y declaraciones, los que hacen alusión a este derecho, ya sea de manera general, indicando sus elementos mínimos, o desarrollando su contenido, de acuerdo con el *status* jurídico de su titular.

4. En ese orden de ideas, en el ámbito universal, los artículos 8 y 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos estipulan de forma genérica que, toda persona, tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales, reconocidos por la Constitución o por la ley. Asimismo, disponen que, en condiciones de plena igualdad, toda persona tiene derecho a ser oída públicamente y con justicia, por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones, o bien, para el examen de cualquier acusación contra ella, en materia penal.

5. En adición, el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, estatuye en su artículo 1°, la igualdad de todas las personas ante tribunales y cortes de justicia nacionales y, de la misma manera, indica que, en caso de enfrentar una acusación penal, toda persona deberá ser oída siguiendo el principio de publicidad y con irrestricto respeto a las garantías legales, por un tribunal previamente establecido, independiente e imparcial; garantías que deben respetarse de igual forma, para la determinación de derechos u obligaciones en materia civil.

6. En lo que a dicho derecho concierne, en el artículo 4° de la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y Abusos del Poder[6], así como en los numerales 10 y 12 de los Principios y Directrices Básicos sobre el Derecho de las Víctimas de Violaciones manifiestas de las Normas Internacionales de Derechos Humanos y de Violaciones Graves del Derecho Internacional Humanitario, a interponer Recursos y obtener Reparaciones[7], se estipula de manera genérica que, las víctimas de delitos, deberán ser tratadas con pleno respeto a su dignidad y gozarán del derecho de acceso a la justicia y de una pronta reparación del daño, según lo dispongan las legislaciones internas.

7. Por otra parte, en lo que respecta al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, del cual forma parte el Estado Mexicano, el numeral XVIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, estipula que, ante la necesidad de hacer valer sus derechos, toda persona podrá acudir ante los tribunales, disponiendo para ello de un procedimiento sencillo y breve, a fin de ser amparado por la justicia contra actos de la autoridad que violen, en su perjuicio, cualquiera de los derechos fundamentales reconocidos constitucionalmente.

8. A pesar de lo anterior, la Convención Americana de Derechos Humanos es el tratado internacional que reconoce de manera más amplia el derecho de acceso a la justicia, esto, a través de dos disposiciones. De este modo, el artículo 8.1, relativo a las "Garantías Judiciales" establece que:

---

4 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Amparo en Revisión 1670/2013, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, México, Sentencia del 10 de marzo de 2004, Tomo XXV, abril de 2007.

5 Ídem.

6 Adoptada por la Asamblea General en su resolución 40/34, de 29 de noviembre de 1985

7 Adoptada por la Asamblea General en su resolución 40/34, de 29 de noviembre de 1985

> *"1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un* Jueza *o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter"* (Sic).

9. Mientras que, el artículo 25.1 de dicho instrumento interamericano, que contempla el derecho a la "Protección Judicial", señala lo siguiente:

> *"1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales"* (Sic).

10. Siguiendo dicha línea normativa, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha sustentado el criterio de que ambas disposiciones, consagran el derecho al acceso a la justicia; a pesar de que tal derecho no se encuentre literalmente reconocido en la Convención. Sin embargo, a través de una interpretación conjunta y armónica de los elementos normativos que integran los artículos 8.1 y 25.1, en varios casos, el Tribunal Interamericano ha analizado si se ha configurado una violación al derecho al acceso a la justicia, cuando no se ha llevado a cabo una investigación diligente de los hechos, los recursos interpuestos no han sido efectivos, o los procesos o procedimientos, no se han sustanciado dentro de un plazo razonable, entre otros aspectos.

11. A guisa de ejemplo, es dable citar la sentencia dictada por la Corte, en el caso *Radilla Pacheco* vs. *México*.[8] En ésta, el Tribunal Interamericano sostuvo que el derecho de acceso a la justicia, requiere que se haga efectiva la determinación de los hechos investigados y, en su caso, de las correspondientes responsabilidades penales en tiempo razonable, en atención a la necesidad de garantizar los derechos de las personas perjudicadas, pues una demora prolongada puede llegar a constituir, por sí misma, una violación de las garantías judiciales[9].

12. Luego entonces, si bien en la historia de la humanidad misma, la autotutela y las conductas autocompositivas representaron las únicas formas de resolver los conflictos surgidos entre una o más persona; en la actualidad, un Estado Democrático, que se precie de serlo, debe haber asumido compromisos internacionales, a fin de evitar que se sigan consumando actos de barbarie entre sus gobernados. De tal suerte que, con ello, el Estado garantizará el pleno respeto y ejercicio de tales derechos por parte de los individuos, a fin de que prevalezca la legalidad y el estado de derecho.

13. De este modo, en el caso de nuestro país, el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos[10], disponía en su texto original la prohibición de ser aprisionado por deudas de carácter civil, y de manera muy concisa, tutelaba el derecho de acceso a la justicia, con la consecuente proscripción para los particulares, de ejercer derechos propios de manera coactiva y sin la intervención de las autoridades competentes, pues son los Órganos del Estado quienes tienen el deber de salvaguardar la seguridad de los gobernados y hacer prevalecer el estado de derecho.

14. No obstante, con la adición al señalado precepto constitucional, en 1987, se concretizó el derecho de acceso a la justicia, y se dotó de garantías mucho más amplias a los gobernados. De modo tal que, se estableció que las resoluciones judiciales deben emitirse de manera pronta, expedita e imparcial; y, en consecuencia, se reconoció también el derecho a la tutela jurisdiccional para los particulares que determinen excitar la función judicial. Por ende, se colige que la impartición de justicia es realizada ordinariamente por los tribunales creados, organizados y sostenidos por el Estado, en ejercicio de su poder soberano; y tienen por objeto decidir los litigios sometidos a su consideración y, de ser necesario, ejecutarlos imperativa y coactivamente.[11]

---

8 Ídem, pág. 1703.

9 Cfr. Caso Radilla Pacheco Vs. Estados Unidos Mexicanos. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2009.

10 Diario Oficial de la Federación del 5 de febrero de 1917. El texto original del artículo 17 constitucional establecía: "Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí mismo ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Los tribunales estarán expeditos para administrar justicia en los términos y plazos que fije la ley; su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales".

11 Pérez C., Fernando, Comentarios en Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Comentada, Ed. Tirant Lo Blanch, México, D.F., pág. 377.

15. Ahora bien, del análisis del citado precepto constitucional no se desprende que los órganos del Poder Judicial sean los únicos encargados de administrar e impartir justicia, ni que los organismos que formalmente integran al Poder Ejecutivo se encuentren impedidos para sustanciar procedimientos administrativos y emitir sus resoluciones. Bajo ese entendido, el derecho fundamental a la administración de justicia es una función estatal, sin importar que dichos órganos pertenezcan al Poder Judicial o al Ejecutivo, siempre y cuando la ley los faculte para ello y no exista prohibición o restricción constitucional al respecto[12].

16. Bajo esa lógica, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha precisado que los derechos que comprende el artículo 17 constitucional, obligan no solamente a órganos judiciales, sino a cualquier autoridad que materialmente realice actos jurisdiccionales. Incluso, nuestro Máximo Tribunal ha ido más allá, al estudiar el derecho al acceso a la justicia, respecto de los actos que realiza el Ministerio Público en materia penal, tratándose de la investigación y persecución de los delitos, tomando como base que, para *"el respeto a los derechos fundamentales, particularmente los relativos a la vida y a la integridad física, el Estado debe asumir una conducta activa y decidida para prevenir su vulneración, a través de las acciones legislativas, administrativas y judiciales necesarias, además de hacer lo necesario para que, en caso de ser vulnerados, las conductas respectivas puedan ser sancionadas"*.[13]

17. Entonces pues, es posible concluir que el derecho acceso a la justicia, como componente de la tutela jurisdiccional, puede oponerse a cualquier órgano o ente estatal que materialmente realice funciones que se asemejen a la función jurisdiccional, por medio de la cual puedan o deban decidir sobre un conflicto entre gobernados. Inclusive, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se ha pronunciado respecto de la estrecha relación que existe entre el derecho de acceso a la justicia y el debido proceso legal. Así, recalcó la vigencia de dicho derecho en todo proceso en que esté en juego la determinación del contenido y alcance de los derechos humanos, sin importar la materia de la que se trate. A modo de ejemplo, es dable citar el Segundo Informe de Progreso de la Relatoría sobre Trabajadores Migratorios y Miembros de sus Familias en el hemisferio, en el que la Comisión manifestó cuanto sigue:

> *"En la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los artículos 8 y 25 son los que tradicionalmente se asocian con una doctrina en desarrollo sobre garantías judiciales y protección judicial de los derechos humanos. En sus propios términos, estos dos artículos se aplican a toda situación en que se deba determinar el contenido y alcance de los derechos de una persona sometida a la jurisdicción del Estado parte, ya sea que se trate de materias* ***penales****,* ***administrativas****, fiscales, laborales, de familia, contractuales o de cualquier otra índole…".*[14]

18. Ahora bien, retomando la función del Ministerio Público, es oportuno establecer que, en el ámbito internacional, las "Directrices sobre la función de los Fiscales de las Naciones Unidas"[15], establecen en sus numerales 11 y 12 que *"Los fiscales desempeñarán un papel activo en la investigación de delitos y en la supervisión de la legalidad de esas investigaciones como representantes del interés público."* Por tal motivo, tienen el indubitable deber de cumplir sus funciones con imparcialidad, firmeza y prontitud, respetar y proteger la dignidad humana y defender los derechos humanos.

19. Bajo dicha premisa, este Organismo Constitucional Autónomo, concluye que, el derecho de acceso a la justicia, no se agota con la simple tramitación de procesos internos, y, en consecuencia, debe hacerse lo indispensable para conocer la verdad de lo sucedido, desahogando las diligencias que sean procedentes, de conformidad con los estándares del debido proceso, pues los Agentes del Ministerio Público, tienen la obligación de actuar con la debida diligencia, como un presupuesto básico de este derecho.

20. De este modo, en materia de procuración de justicia, el artículo 21, párrafos primero y segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece la obligación del Ministerio Público de investigar los delitos, imponiéndole la consecuente obligación de que desde que tenga conocimiento de la posible comisión de un hecho ilícito, deberá proveer las medidas que estén a su alcance para el esclarecimiento de los hechos, y

---

12 Ídem, pág. 380.

13 Ídem, pág. 1568.

14 *Cfr. Segundo Informe de progreso de la Relatoría sobre Trabajadores Migratorios y Miembros de sus Familias en el Hemisferio, cit.*, párr. 90.

15 Adoptadas por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas, celebrado en la Habana, Cuba, en 1990.

en su caso, ejercer la acción penal que corresponda, así como brindar atención a las víctimas del delito.

21. Por otro lado, el Código Nacional de Procedimiento Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de marzo de 2014, establece en el artículo 131, las obligaciones del Ministerio Público en la investigación de los delitos. El cual debe, entre otras cosas, vigilar que se cumpla estrictamente con los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados, debiendo ejercer la conducción y el mando de la misma, coordinándose durante ella con policías y peritos. Y una vez que tenga noticia del delito, ordenar o supervisar la aplicación de las medidas necesarias para impedir que se pierdan, destruyan o alteren los indicios y cerciorarse de que se han seguido las reglas y protocolos para su preservación y procesamiento, ejerciendo funciones de investigación.

22. En esa tesitura, este Organismo Constitucional Autónomo, coincide con el criterio asumido por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en la Recomendación General 14, *"Sobre los derechos de las víctimas de delitos"*, emitida el 27 de marzo de 2007, en la que, en el punto número 3, inciso b), del apartado de observaciones, reconoció que el trabajo de investigación del delito en la averiguación previa constituye: *"(…) la etapa medular en la fase de procuración de justicia, porque de ella depende el ejercicio de la acción penal en contra del probable responsable, o bien para ubicarlo y lograr la solicitud de la reparación del daño (…)"*.

23. De igual manera, concuerda con el razonamiento expuesto por el Organismo Nacional, en la Recomendación General 16, sobre *"el plazo para resolver una averiguación previa"*, de 21 de mayo de 2009, en la que enfatizó que los agentes del Ministerio Público, a fin de garantizar una adecuada procuración de justicia, deben cumplir en el desarrollo de su labor, con las diligencias mínimas para:

> a) evitar la dilación en el trámite de la averiguación previa, de tal manera que no existan omisiones en la práctica de diligencia por los periodos prolongados,
> b) garantizar el desahogo de las diligencias de investigaciones necesarias para acreditar el delito y la probable responsabilidad del sujeto,
> c) preservar los indicios del delito a fin de asegurar que las líneas de investigación puedan agotarse,
> d) propiciar el desahogo de los análisis y dictámenes periciales,
> e) dictar las medidas de auxilio y protección a las víctimas del delito y a los testigos,
> f) garantizar el acceso a la justicia a las víctimas del delito mediante la eliminación de la práctica de elaborar actas circunstanciadas en lugar de averiguaciones previas,
> g) evitar enviar al archivo o a la reserva las averiguaciones previas si no se han agotado las líneas de investigación y,
> h) propiciar una mayor elaboración de investigación por parte de los elementos de la policía que tengan a su cargo dicha función.

24. Aunado a ello, en la Recomendación General número 16, la Comisión Nacional advirtió que, la falta de resultados por parte de las instancias encargadas de la procuración de justicia del país, no sólo obedece a la carga de trabajo, sino también a la ineficiencia o apatía de los responsables de la investigación. Quienes, en muchos de los casos, se dedican a esperar que las víctimas aporten elementos que ayuden a integrar la averiguación previa, o a que los peritos rindan sus dictámenes, sin que exista una verdadera labor de investigación, en la que se realicen las diligencias mínimas necesarias. Observación con la que esta Comisión Estatal también coincide, y que fue motivo de Recomendaciones emitidas a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas durante los años 2019 y 2020. En dichas resoluciones, se evidenció la falta de compromiso y diligencia por parte de los Agentes del Ministerio Público en la investigación de los delitos, y, por ende, se acreditó su responsabilidad en la violación del derecho de acceso a la justicia; tal es el caso de las Recomendaciones 2/2019 y 7/2019, 01/2020, 05/2020, 09/2020, 26/2020, 29/2020 y 30/2020.

25. De esta forma, partiendo de los argumentos hasta aquí esgrimidos, esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, concluye que existe una inadecuada procuración de justicia, en los casos en los cuales los servidores públicos encargados de la investigación y persecución de los delitos, no actúan con la debida diligencia, u omiten realizar acciones pertinentes y prontas, para el esclarecimiento de los hechos materia de investigación; o en su defecto, las que llevó a cabo fueron realizadas de manera deficiente,

lo cual genera que los delitos continúen impunes. Por consiguiente, la dilación en la procuración de justicia consiste en el retardo en las funciones investigadora y persecutoria de los delitos, lo que en muchos casos conlleva la prescripción de la acción penal y la consecuente extinción de la responsabilidad penal que pudiera atribuirse a las personas señaladas como responsables.

26. Tan es así que, la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, también se ha pronunciado al respecto, y ha sustentado el criterio de que el *"deber de investigar"*: *"(…) es una obligación de medio y no de resultado, que debe ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio, y no como una simple formalidad, condenada de antemano a ser infructuosa. La obligación del Estado de investigar debe cumplirse diligentemente para evitar la impunidad y que los hechos vuelvan a repetirse (…) una vez que las autoridades estatales tengan conocimiento del hecho, deben iniciar ex officio y sin dilación, una investigación seria, imparcial y efectiva por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad y a la persecución, captura, enjuiciamiento y eventual castigo de todos los autores de los hechos (…)*[16]."

27. Asimismo, en el "Caso *Ivcher Bronstein vs. Perú",* el Tribunal Interamericano reconoció que por impunidad se entiende: *"(…) la falta, en su conjunto, de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de violaciones a los derechos protegidos por la Convención Americana (…)." La Corte ha advertido que, el Estado, tiene la obligación de combatir tal situación por todos los medios legales disponibles, ya que la impunidad propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y sus familiares*."[17]

28. Mientras tanto, en el ámbito jurídico interno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ha pronunciado en diversas tesis, sobre el derecho de acceso a la justicia, como es el caso de la marcada con el número de registro 171789, en materia constitucional:

> *DERECHOS HUMANOS. LA GARANTÍA JUDICIAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 8o., NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA RELATIVA, ES CONCORDANTE CON LAS DE AUDIENCIA Y ACCESO A LA JUSTICIA CONTENIDAS EN LOS ARTÍCULOS 14 Y 17 CONSTITUCIONALES. El citado artículo 8o., numeral 1, al disponer que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un Juez o tribunal competente, independiente e imparcial establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter, resulta concordante con los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin que llegue al extremo de ampliar las prerrogativas de audiencia y acceso a la justicia en ellos contenidas, porque la prerrogativa de que "toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías", está establecida en el segundo párrafo del indicado artículo 14, que prevé la garantía de audiencia en favor del gobernado mediante un juicio en el que se respeten las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, y la referencia de que la garantía judicial en comento debe otorgarse "dentro de un plazo razonable, por un Juez o tribunal competente, independiente e imparcial", está en consonancia con el mencionado artículo 17, en lo concerniente a la tutela jurisdiccional de manera pronta, completa e imparcial, que previene que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes.*[18]

29. Así como, a través de la tesis de jurisprudencia marcada con número de registro 171257, en materia constitucional:

> *ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia*

---

16 *"Caso González y otras ("Campo Algodonero") vs. México"*, sentencia de 16 de noviembre de 2009 (Excepción, preliminar, fondo, reparaciones y costas), párrafos 289 y 290.

17 Sentencia de 24 de noviembre de 2009, párrafo 12.

18 Amparo en revisión 282/2007. Ramón Islas Arriola. 20 de junio de 2007. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Óscar Palomo Carrasco. 20. En la anterior tesis, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, establece la relación jurídica existente entre el contenido del artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y lo establecido en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación al derecho de acceso a la justicia, el cual se refiere a la prerrogativa con la que cuentan las personas para ser oídas por un tribunal competente, imparcial e independiente y, evitar con ello, la vulneración de sus derechos humanos.

consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales.[19]

30. Mediante dichos criterios, nuestro máximo Tribunal Constitucional enfatiza la obligación de las autoridades encargadas de dirimir actos en la esfera jurisdiccional, de garantizar el acceso a la impartición de justicia, de acuerdo a los principios de justicia pronta, completa, imparcial y gratuita, a fin de brindar al gobernado, la garantía a su derecho al acceso a la justicia. Obligaciones que, como ya se indicó previamente, se extienden a la materia administrativa y abarca en consecuencia autoridades que materialmente diriman controversias y decidan sobre derechos de los gobernados.

- De la violación del derecho de acceso a la justicia, en relación con el derecho a una justicia pronta y expedita, atribuida a **AR1**, otrora Agente del Ministerio Público, adscrita a la Unidad Especializada en Investigación Mixta, del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas; así como a **AR2**, Agente del Ministerio Público Especializada en Investigación Mixta número VII, del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas, con motivo de la integración de la carpeta de investigación **(…).**

31. Retomando el contenido de los instrumentos internacionales, interamericanos, e internos que brindan sustento jurídico a la presente resolución, así como la Recomendación General número 16, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, este Organismo considera que, del análisis de las constancias que integran la carpeta de investigación **(…)**, se advierte una inadecuada procuración de justicia, lo cual actualiza la violación del derecho a una justicia pronta y expedita, al ser evidente el retardo injustificado en que han incurrido las diversas Fiscales que la han integrado. En primer lugar, se observa que la referida carpeta de investigación, se originó con la denuncia que el quejoso interpusiera ante **MP1**, Fiscal del Ministerio Público número 10 de Atención Permanente del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas, en fecha 25 de octubre de 2018. Mediante ésta, denunció el delito de daño en las cosas cometido en su perjuicio, atribuyéndolo a **H1** y **H2**; **I1** y **I2**, alias “El Frutero”. Fecha en la cual, fue remitida a la Unidad Especializada en Investigación Mixta, a cargo de **AR1.**

32. En segundo lugar, se infiere que, en esa misma fecha, **AR1** dictó acuerdo de radicación y ordenó investigación ministerial; posteriormente, en fecha 30 de octubre de 2018, la Fiscal recabó comparecencia a **VD**, quien exhibió documentación relacionada con los antecedentes de la problemática que persiste entre él y sus denunciados. Ahora bien, no obstante que, del **30 de octubre de 2018**, al **12 de noviembre** de ese mismo año, no se advierte un lapso prolongado durante el cual la Fiscal haya omitido realizar diligencias; esta Comisión considera que, por el ilícito denunciado, el hecho de que el dictamen pericial de campo y

---

19 Amparo directo en revisión 980/2001. Enlaces Radiofónicos, S.A. de C.V. 1o. de marzo de 2002. Cinco votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: María Dolores Omaña Ramírez. Amparo directo en revisión 821/2003. Sergio Mendoza Espinoza. 27 de junio de 2003. Cinco votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: María Dolores Omaña Ramírez. Amparo en revisión 780/2006. Eleazar Loa Loza. 2 de junio de 2006. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Alma Delia Aguilar Chávez Nava. Amparo directo en revisión 1059/2006. Gilberto García Chavarría. 4 de agosto de 2006. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Alfredo Aragón Jiménez Castro. Amparo en revisión 522/2007. Gustavo Achach Abud. 19 de septiembre de 2007. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Javier Arnaud Viñas. Tesis de jurisprudencia 192/2007. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del diez de octubre de dos mil siete.

causalidad de incendio fuese ordenado hasta **13 días después de recibida la denuncia**, afectó los intereses de la víctima, aquí quejoso. Ello en virtud de que, durante esos 13 días, los indicios pudieron haberse contaminado o perdido, aquellos no susceptibles de preservarse de manera adecuada durante el transcurso del tiempo, por encontrarse el vehículo en la vía pública.

33. Además, en las fotografías del vehículo que se acompañaron al dictamen pericial de valuación, no se aprecia que el área haya sido siquiera acordonada; incluso, de la integración de la carpeta de investigación, se desprende que, hasta antes de la determinación de archivo temporal a cargo de la Fiscal en comento, solo había sido elaborado el dictamen pericial en materia de valuación, lo cual ocurrió hasta el día 30 de noviembre de 2018. Y, por lo que hace al dictamen pericial de campo y causalidad de incendio, este Organismo observa que, hasta la fecha, éste no se encuentra glosado a autos; aunado al hecho de que los Fiscales que han tenido a cargo la investigación, se han limitado a remitir atentos recordatorios de dicho dictamen a la Dirección de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado, lo que imposibilita que esta Comisión tenga certeza respecto de la fecha en que, materialmente, se realizó dicho dictamen pericial.

34. Es decir, de la narrativa del quejoso con relación a los hechos denunciados, se deduce que éste era propietario de un vehículo de motor, del cual proporcionó sus características a **MP1**, Fiscal del Ministerio Público número 10 de Atención Permanente del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas. Asimismo, se advierte que dicho vehículo sufrió daños a causa de un incendio ocurrido en fecha **25 de octubre de 2018**, aproximadamente a las **00:15 horas.** De la relatoría de los hechos, se desprende que **T1** y **T2** auxiliaron a **VD**, uno dándole aviso de lo ocurrido y el otro apagando el fuego. De la misma manera, se observa que el quejoso señaló que arribaron elementos de varias corporaciones, como es el caso de la Dirección de Seguridad Pública de Fresnillo, Zacatecas y la Unidad de Protección Civil y Bomberos, dependiente de dicha Dirección; así como 2 ambulancias, de las cuales no pudo establecer Dependencia. Igualmente, explicó que, una vez controlado el fuego, arribaron elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado, quienes lo auxiliaron en su traslado a las instalaciones de la Casa de Justicia, para interponer su denuncia.

35. En tercer lugar, se tiene que, **AR1**, en ese entonces Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Investigación Mixta número 1, del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas, ordenó, mediante oficio de fecha 25 de octubre de 2018, la respectiva investigación ministerial, al Comandante adscrito a la Unidad de Investigación Mixta a su cargo, bajo los siguientes lineamientos:

> *"…1. Acta de inspección del lugar de los hechos con su respectiva fijación fotográfica haciendo énfasis en los daños ocasionados a la vivienda;*
> *2. Búsqueda y localización de (los) imputado (s) y en caso de resultar afirmativo recabar Acta de Individualización e Identificación del (los) Imputado (s) con previa lectura de derechos;*
> *3. De resultar positivo el punto anterior realizar Búsqueda en la base de Datos con que cuenta en esa a su cargo con la finalidad de recabar algún tipo de antecedente del ahora imputado;*
> *4. Entrevistar a testigos que pudieran aporta datos relevantes para la presente investigación (GIOVANNI AREVALO, CERARDO COMES Y VECINOS ALEDAÑOS);*
> *5. Indagar si en el lugar de los hechos se cuenta con cámaras de video vigilancia y de resultar afirmativo recabar el video correspondiente;*
> *6. De resultar afirmativo el punto anterior realizar al Acta de Inspección del Video asegurado;*
> *7. Acta de inspección del vehículo involucrado en los presentes hechos con su respectiva fijación fotográfica haciendo énfasis en los daños ocasionados al mismo;*
> *8. Cuanta diligencia sea necesaria para el esclarecimiento de los hechos…".*[20]

36. Sin embargo, del oficio de fecha 21 de diciembre de 2018, signado por el **PI1**, Comandante de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, en conjunto con **PI2** y **PI3**, agentes de la Corporación, no se deduce el cumplimiento eficaz del mandato realizado por **AR1**[21]. En primer término, no se atendió el primer punto de la investigación ordenada por la Fiscal, toda vez que no se informó respecto

---

2020 Véase oficio (…), visible a foja 36, de la carpeta de investigación (…).
21 Véase oficio número (…), visible a foja 77, de la carpeta de investigación (…).

de daños ocasionados a la vivienda de **VD.** En segundo lugar, este Organismo nota que solo se entrevistó a **H1**, del cual, se recabó acta en calidad de testigo y no de imputado como ordenó la Fiscal. Es decir, aun y cuando ésta ordenó la búsqueda y localización de todos los imputados, dicha diligencia se omitió en relación con **H2**, **I1** y **I2**, alias "El Frutero; demás, aunque se mandó la consulta de la base de datos de la Policía de Investigación, se omitió dicha consulta en el caso del primero nombrado, al cual sí se había entrevistado.

37. Por otro lado, pese a que se ordenó la localización de los testigos de los hechos denunciados por el quejoso, los elementos se limitaron a entrevistar a **VD**, quien, según informaron, se comprometió a presentarlos en la Unidad de Investigación. Lo anterior, indica que no cumplieron eficientemente con el mandato ministerial, en los términos establecidos por **AR1**; además de que no se tiene la certeza de que en realidad se haya entrevistado al quejoso, en virtud de que no existe acta relativa a dicha diligencia. Finalmente, **PI1**, Comandante de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas y **PI2** y **PI3**, elementos de dicha Corporación, informaron que, de las entrevistas realizadas a vecinos del lugar donde ocurrieron los hechos que investigaban, no se obtuvieron resultados positivos.

38. Sin embargo, pese a la deficiente indagación realizada por el **PI1**, Comandante de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, en conjunto con **PI2** y **PI3**, **AR1** no ordenó la ampliación de la misma; con todo y que, como ya se apuntó, ni siquiera se agotó en los términos por ella ordenados. Aunado a ello, aun sin contar con el dictamen pericial de campo y de causalidad de incendio, y sin tomar en consideración que no se había localizado a **H2**, **I1** y **I2**, además de que, mediante el referido informe de autoridad, los agentes investigadores le habían indicado que el quejoso presentaría a sus testigos en fecha 8 de marzo de 2019, determinó el archivo temporal de la investigación. Deduciéndose entonces que, desde el 21 de diciembre de 2018, hasta esa fecha, transcurrieron **73 días hábiles** o **2 meses y 13 días**, sin que se realizara actuación alguna, tendente al esclarecimiento de los hechos.

39. Ahora bien, como se indicó en el apartado de la incompetencia de la Comisión, este Organismo se encuentra imposibilitado para realizar el análisis jurídico de la determinación dictada por la Fiscal. Empero, sí hace énfasis en dichas deficiencias, porque denotan la ineficiencia y falta de diligencia en la integración de la carpeta de investigación **(…)**; por lo que, en este punto, resulta conveniente resaltar la importancia que conlleva la debida construcción de la teoría del caso. La cual incluye agotar las distintas hipótesis o líneas de investigación que elaboren los Agentes de Ministerio Público, para saber cuál de esas estrategias puede tener mayor viabilidad al momento de consignar la averiguación previa, o de judicializar la carpeta correspondiente. Por lo cual, debe orientarse a acreditar, cuando menos el tipo penal que atribuye al sujeto activo; el grado de la ejecución del hecho (para saber si el hecho típico fue consumado o se quedó en tentativa) y, la forma de intervención (para conocer si el sujeto es autor o partícipe del hecho típico que se le atribuye).

40. Circunstancias que, en el caso de la presente Recomendación, no sucedieron, pues aún y cuando mediante la orden de investigación ministerial, pareciera que la Fiscal tenía clara una línea de investigación, la cual, se orientaba a la posible participación de las personas señaladas por el quejoso; es evidente que no era así, desde el momento en que, a pesar de que no se realizaron todos los actos de investigación que ordenó, determinó archivar la carpeta de investigación. Ahora bien, como ya se dijo antes, **VD** ejerció su derecho a impugnar la determinación de archivo temporal dictada por **AR1**. Lo cual ocurrió en fecha 9 de abril de 2019; originándose con ello la reapertura de la carpeta de investigación, por lo que, es posible constatar con la compulsa del contenido de las copias actualizadas de la carpeta de investigación **(…)**, primordialmente, del acuerdo de radicación, dictado en fecha **21 de mayo de 2019**, mediante el cual se ordenó la prosecución de dicha carpeta.

41. Por otro lado, de la segunda parte de la carpeta de investigación **(…)**, proporcionada por **AR1**, en fecha 29 de noviembre de 2019 se infiere que, una vez que se continuó con la investigación de la referida carpeta de investigación, **AR1** requirió al quejoso, mediante cédula de citación de fecha **24 de abril de 2019**, que presentara a los posibles testigos de los hechos que previamente había denunciado. Aunque este Organismo no soslaya la participación activa que el Código Nacional de Procedimientos Penales concede a la víctima dentro del proceso penal, estima que, los Agentes del Ministerio Público a cargo de la investigación, no deben limitar sus indagaciones a la posibilidad de que los ofendidos o

víctimas aporten testigos; máxime si tomamos en consideración que, en el caso específico, **VD**, proporcionó nombres de las personas que lo auxiliaron durante el incendio que causó los daños a su vehículo, aunado al hecho de que, previamente, se había solicitado mediante orden de investigación, la localización de dichas personas.

42. Además, debe agregarse que, desde esa fecha y salvo la recepción del informe relativo a la inspección de un CD, rendida por elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, en fecha **12 de mayo de 2019**, no se desahogó ninguna otra diligencia. Y no es sino hasta después que **VD** compareció en fecha **10 de junio de 2019**, que se retomó de nueva cuenta dicha investigación. Lo cual, representa una inactividad procesal de **47 días** o **1 mes 17 días**; tiempo que, si bien no es muy prolongado, permite deducir que se estaba meramente a la espera de que el quejoso presentara sus testigos, sin seguir ninguna línea de investigación concreta. Por otra parte, esta Comisión advierte que, luego de la comparecencia del quejoso, la Fiscal ordenó seguimiento de investigación ministerial en fecha **11 de junio de 2019**; empero, no en los términos ordenados originalmente, sino solamente con la intención de localizar a los testigos que éste señaló en la referida comparecencia. Luego de lo cual, solo se recabó nueva comparecencia al quejoso, en fecha **25 del mismo mes y año**, y se recibió la ampliación de investigación ministerial, signado por **PI1** y por **PI4**, respectivamente Inspector Jefe y Policía Primera de la Policía de Investigación, en fecha 15 de julio de 2019.

43. Nótese entonces, cómo desde el 15 de julio de 2019, hasta el 29 de noviembre de 2019, fecha en que se recibió la actualización de la carpeta de investigación que ahora se analiza, **AR1** no realizó ningún acto de investigación tendente al esclarecimiento de los hechos denunciados por **VD**; lo cual, representa un lapso de inactividad procesal de **4 meses y 14 días** en perjuicio del derecho de acceso a la justicia del quejoso, específicamente en lo que a una justicia pronta y expedita se refiere. Aunado a ello, este Organismo solicitó copias actualizadas de la carpeta de investigación **(…)**, las cuales fueron enviadas, previa remisión a **SJ**, Director Regional de la zona norte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, por **AR2**, Agente del Ministerio Público Especializada en Investigación Mixta número VII, del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas.

44. Del anterior informe y copias del legajo en comento, se advierte que, luego de recibirse la ampliación de investigación ministerial, signado por **PI1** y **PI4**, respectivamente Inspector Jefe y Policía Primera de la Policía de Investigación; obra glosada entrevista en calidad de testigo, de **T3**, practicada en fecha **17 de diciembre de 2019**, por el Agente de Policía de Investigación **PI5**. Sin embargo, posterior a ello, la Fiscal en mención no ordenó ni practicó otros actos de investigación; por lo que después de dicha diligencia, se observa que, en fecha **13 de febrero de 2020,** se realizó revisión de dicha carpeta por personal de la Visitaduría General de Justicia. No obstante, no es sino hasta el **21 de mayo de 2020** que se dictó acuerdo de prosecución de investigación, por **ANR5**, entonces Agente del Ministerio Público Especializada en Investigación Mixta del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas. Lo anterior, significa que transcurrieron **3 meses, 8 días** antes de que se le remitiera la carpeta de investigación (…), a esta última Fiscal.

45. Luego de ordenar la prosecución de la indagatoria, **ANR5**, entonces Agente del Ministerio Público Especializada en Investigación Mixta del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas, remitió atento recordatorio de solicitud de dictamen pericial de campo y de causalidad de incendio, **en fecha 26 de junio de 2020**. Ahora bien, en este punto, es de suma importancia mencionar que, según informó **ANR5** a este Organismo, en fecha 01 de agosto de 2020, le fue otorgada incapacidad por el Instituto Mexicano del Seguro Social, regresando a labores hasta el mes de junio de 2021; motivo por el cual, no puede atribuírsele ningún tipo de responsabilidad, en razón de que, durante ese período de tiempo, no estuvo a cargo de la indagatoria.

46. Posterior a dicha diligencia, este Organismo advierte que no se volvió a actuar en la referida carpeta de investigación, hasta en fecha **10 de noviembre de 2020**, fecha en la cual, la mencionada **AR2**, Agente del Ministerio Público Especializada en Investigación Mixta número VII, del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas, se limitó una vez más a remitir atento recordatorio del señalado dictamen pericial. Lo anterior, representa una inactividad procesal de **4 meses y 15 días**, atribuible de manera directa a la Fiscal en comento y actualiza la violación del derecho a una justicia pronta y expedita en agravio del quejoso. A lo cual también se suma la inactividad de **2 meses y 8 días**, transcurridos desde el 10 de

noviembre de 2020, hasta el **18 de enero de 2021**, fecha en la cual, se limitó a solicitar el mismo dictamen; lo cual sucedió de nueva cuenta, en fecha **09 de marzo de 2021**, actualizándose una inactividad de **1 mes y 9 días**, lo cual también impacta en el derecho de acceso a una justicia pronta y expedita, en perjuicio de **VD** Sin que, hasta la fecha, este Organismo advierta el seguimiento de una línea de investigación clara, tendente a la identificación de los posibles responsables del ilícito denunciado por el quejoso, trayendo como consecuencia que dicha carpeta de investigación, no se encuentre resuelta.

47. Bajo ese contexto, esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, en coincidencia con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, respecto del criterio sustentado en la ya mencionada Recomendación General 16, sobre *"el plazo para resolver una averiguación previa"*, de 21 de mayo de 2009, considera que, el trabajo de investigación del delito durante la integración de una averiguación previa o carpeta de investigación, *constituye "una etapa medular en la fase de procuración de justicia, porque de ésta dependen el ejercicio de la acción penal en contra del probable responsable, o bien, para ubicarlo y lograr la solicitud de la reparación del daño",* razón por la cual, los servidores públicos adscritos a las Fiscalías deben llevar adelante, con rigor y escrúpulo, la investigación que permita la apertura de un proceso, para así evitar la impunidad.

48. Conforme a lo establecido en tal Recomendación, esta Comisión Estatal también coincide con su homónimo Nacional, en el sentido de que si bien no existe un término para integrar una averiguación previa, dado que los plazos sólo existen generalmente cuando la libertad de una persona está sujeta al resultado del procedimiento, circunstancia contraria a la que ocurre en las averiguaciones previas sin detenido, ello constituye una laguna legal que debe ser subsanada, en virtud de que el resultado del procedimiento puede derivar en la afectación de los bienes jurídicos, como es el caso del derecho a la libertad personal (probable responsable) o a la reparación del daño (víctima u ofendido), pero además, denotan una falta de actividad por parte de los Agentes del Ministerio Público, al dejar la carga de la prueba a la víctima u ofendido, circunstancia que propicia en el porcentaje mencionado, un favorecimiento a la impunidad.

49. La afirmación anterior, se sustenta con los resultados del Índice Global de Impunidad 2016[22], estudio en el que el INEGI ubicó a Zacatecas entre las entidades federativas con un índice de impunidad alto; siendo precisamente el fraude, uno de los delitos que más se cometen en el fuero común, de acuerdo con dicho estudio. Adicionalmente, se obtuvo como resultado que sólo el 25% de las averiguaciones previas llegan a ser determinadas, cifra que representa menos de la mitad del promedio nacional de 57%. Por otra parte, se encontró que el porcentaje de averiguaciones previas determinadas que pasan a ser causas penales en primera instancia es de 43% mientras que la cifra nacional es de 19%. También es notorio que solo el 17% de los imputados en el estado alcanzan una sentencia mientras que la media nacional es de 29%.

50. Adicionalmente, de acuerdo con dicho estudio, Zacatecas se encuentra entre las entidades con mayor número de personal en las procuradurías por cada cien mil habitantes (91), mejorando su cifra del año anterior (80) y posicionándose muy por encima del promedio nacional (78). Destaca aún más al posicionarse entre los primeros lugares con mayor número de agencias del Ministerio Público, 7 por cien mil habitantes, mejorando igualmente la cifra del año anterior de 6. Otro dato para destacar es el número de agentes por cada mil delitos registrados, 11 contra 6 a nivel nacional.

51. Con tales datos, se colige entonces que, la negligencia y la falta de diligencia en la función persecutoria a cargo de **AR1**, entonces Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Investigación Mixta del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas y de **AR2**, Agente del Ministerio Público Especializada en Investigación Mixta número VII, del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas, quienes no llevaron a cabo las indagaciones de forma eficaz, seria, imparcial y rigurosa, favoreciendo así la impunidad y, como en el caso sucedió, impidiendo que **VD** ejerciera su derecho a que se administrara justicia por el órgano jurisdiccional competente, ha ocasionado que la carpeta de investigación **(…)** continúe sin resolverse, con el consecuente menoscabo de sus derechos humanos, en concreto, de su derecho de acceso a la justicia, en su vertiente de derecho a una justicia pronta y expedita.

---

22 https://www.udlap.mx/igimex/

52. En suma, esta Comisión de Derechos Humanos concluye que la inactividad detectada en el actuar de **AR1** y de **AR2**, no tiene justificación alguna. Pues, por el contrario, denota apatía y falta de diligencia y seriedad en su labor investigadora, máxime si tomamos en consideración que, como ya también se dijo, dicha función, es la parte medular de la procuración de justicia. Y ello, es de pleno conocimiento de los Agentes del Ministerio Público, como titulares de la acción penal y representantes de los intereses de la sociedad; no obstante, las omisiones evidenciadas, ha derivado en el quebrantamiento del derecho de acceso a la justicia de **VD**, concretamente de su derecho a una justicia pronta y expedita.

53. Luego entonces, como bien se puede apreciar, dentro de los principios rectores que deben regir el actuar del Ministerio Público se encuentra el respeto a los derechos humanos; por tanto, es una obligación que su proceder sea eficaz, imparcial y legal, lo que en el presente asunto no ha ocurrido. Al menos, por parte de **AR1**, entonces Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Investigación Mixta del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas y de **AR2**, Agente del Ministerio Público Especializada en Investigación Mixta número VII, del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas, sin que a la fecha se haya judicializado la carpeta de investigación **(…)** o, en su defecto, se haya determinado cualquier forma de conclusión establecida en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Por tanto, la omisión en su ejercicio obligatorio, violenta el derecho de acceso efectivo a la justicia, en relación con el derecho a una justicia pronta y expedita, el cual comprende, el derecho a una tutela jurisdiccional efectiva al estar fundamentados constitucional y legalmente. Lo anterior, tiene sustento en el criterio jurisprudencial emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto refiere:

> ***"DERECHO DE ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA. ETAPAS Y DERECHOS QUE LE CORRESPONDEN****.*
> *De los artículos 14, 17 y 20, apartados B y C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, deriva el derecho de acceso efectivo a la justicia, el cual comprende, en adición a determinados factores socioeconómicos y políticos, el derecho a una tutela jurisdiccional efectiva y los mecanismos de tutela no jurisdiccional que también deben ser efectivos y estar fundamentados constitucional y legalmente. Ahora bien, en la jurisprudencia 1a./J. 42/2007, de rubro: "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES.", la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió el acceso a la tutela jurisdiccional como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que, a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute tal decisión; de ahí que este derecho comprenda tres etapas, a las que corresponden tres derechos: (i) una previa al juicio, a la que le corresponde el derecho de acceso a la jurisdicción, que parte del derecho de acción como una especie del de petición dirigido a las autoridades jurisdiccionales y que motiva un pronunciamiento por su parte; (ii) una judicial, que va desde el inicio del procedimiento hasta la última actuación y a la que concierne el derecho al debido proceso; y, (iii) una posterior al juicio, identificada con la eficacia de las resoluciones emitidas. Ahora, los derechos mencionados alcanzan no solamente a los procedimientos ventilados ante Jueces y tribunales del Poder Judicial, sino también a todos aquellos seguidos ante autoridades que, al pronunciarse sobre la determinación de derechos y obligaciones, realicen funciones materialmente jurisdiccionales.*
>
> *Amparo en revisión 352/2012. Braskem, S.A. 10 de octubre de 2012. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Mario Gerardo Avante Juárez. Amparo en revisión 121/2013. Ignacio Salgado García. 12 de junio de 2013. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: Cecilia Armengol Alonso. Amparo en revisión 42/2013. María Dolores Isaac Sandoval. 25 de septiembre de 2013. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ausente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretario: David García Sarubbi. Recurso de reclamación 131/2013. Embotelladoras Bepensa, S.A.*

de C.V. 19 de febrero de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Francisco Octavio Escudero Contreras. Amparo directo en revisión 3646/2013. Elías García Sánchez. 26 de febrero de 2014. Cinco votos de los ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Mario Gerardo Avante Juárez.

Nota: La tesis de jurisprudencia 1a./J. 42/2007 citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, abril de 2007, página 124. Tesis de jurisprudencia 103/2017 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal en sesión de quince de noviembre de dos mil diecisiete. Esta tesis se publicó el viernes 24 de noviembre de 2017 a las 10:35 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 27 de noviembre de 2017, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013."[23]

- De la violación del derecho de acceso a la justicia en sede administrativa, en relación con el derecho al debido proceso, atribuida a **AR3** y **AR4** ex Directores de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de la Presidencia Municipal de Fresnillo, Zacatecas.

54. Como se ha establecido en el cuerpo de esta resolución, el derecho al acceso a la justicia lo ha definido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijan las leyes, para acceder de manera expedita, esto es, sin obstáculos, a tribunales independientes e imparciales, para plantear una pretensión o defenderse de ella, con el fin de que, a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecuten la decisión. Por lo que el derecho a la tutela judicial genéricamente debemos de entenderlo se integra como el derecho a debido proceso, el derecho de acceso a la justicia y la eficacia de la sentencia o decisión obtenida.

55. Pero, este derecho, no solo se limita, como también ya fue motivo de análisis, a la sede jurisdiccional, sino que de igual manera abarca a cualquier órgano o ente estatal que materialmente realice funciones que se asemejan a la función jurisdiccional, por medio de la cual puedan o deban decidir sobre un conflicto entre gobernados. También, debe atenderse que los hechos que narra el quejoso nos señalan la necesidad de lo que se le ha denominado la justicia cotidiana, es decir, la justicia que es más cercana a las personas. La que vivimos día a día en nuestras interacciones ordinarias, la que facilita la convivencia armónica y la paz social, la que reclaman vecinos, trabajadores, padres de familia y la que se vive en las escuelas.[24]

56. Sin duda, si los hechos que nos ocupan se atienden desde el aspecto cotidiano, la situación que vive la parte quejosa desde hace varios años, se centra en un conflicto con particulares que son vecinos de su domicilio, con los que a diario se tiene una interacción y que de ésta han resultado diversos desacuerdos que la parte quejosa ha señalado ante las autoridades administrativas correspondientes, sin que de ello se haya atendido y resuelto de fondo, esto es, se hayan determinado los derechos que a cada uno de los involucrados les asiste; por lo que ante tal insuficiencia de ese orden jurídico, de su ineficacia para lograr la convivencia armónica y la paz social, trae la necesidad de acudir a la *ultima ratio* del estado, el derecho penal, como último recurso para proteger bienes jurídicos, aunque éstos tampoco resulten del todo eficaces.

57. Entonces, si tenemos por conclusión que la justicia cotidiana, de carácter administrativo en este caso, no ha dado respuesta, a pesar de que los servidores públicos involucrados contaban con elementos jurídicos para iniciar los procesos correspondientes, tenemos una violación del derecho de acceso a la justicia en sede administrativa, en relación con el derecho al debido proceso, que se les atribuye directamente a los servidores públicos que han ocupado la titularidad de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de la Presidencia Municipal de Fresnillo, Zacatecas, es decir, **AR3** y **AR4**. Ya que, de los

---

23 Décima Época, Registro: 2015591, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 48, noviembre de 2017, Tomo I, Materia(s): Constitucional, Tesis: 1a./J. 103/2017 (10a.), Página: 151

24 Obtenido de: Di_logos_Justicia_Cotidiana.pdf (www.gob.mx)

anteriores Directores, esta Comisión no puede analizar su actuar, por exceder del término previsto para ello, acorde a lo establecido por el artículo 31 de la Ley que rige su actuar, por lo que su participación solo se mencionará, en todo caso, como antecedente de los hechos que nos ocupan; conclusión a la que se arriba en atención a los razonamientos que se expresan enseguida.

58. De los antecedentes vertidos en la presente resolución, se tiene que la parte quejosa ha acudido a la autoridad administrativa municipal desde el 28 de noviembre del año 2016, dirigido al Departamento de Plazas y Mercados y a la Dirección General de Obras y Servicios Públicos y que en consecuencia se giraron los oficios (…), de fecha 06 de diciembre de 2016, emitido por el Departamento de Desarrollo Urbano y dirigido al propietario y/o responsable de Balconería “Alex”; en el cual se le solicita al propietario y/o responsable del taller, no ocupar la vía pública con puertas, ventanas, portones y cualquier otro objeto relacionado con el trabajo que desempeña esto por generar molestias a los peatones que transitan por ese lugar, al que no se le dio mayor seguimiento.

59. Oficios que siguieron generándose tanto por el quejoso como por la autoridad, del año 2016 al 2020, temporalidad en la cual, la autoridad municipal incluso tomó comparecencia del quejoso **VD,** a través de la Dirección Jurídica de la Presidencia Municipal de Fresnillo, Zacatecas, esto, en fecha 5 de octubre de 2018, en la que dio cuenta de los hechos que había venido denunciando y que continuaban, exhibiendo para ello copia de los escritos que con anterioridad presentó a modo de denuncia, sin que se le diera respuesta más allá de mandar oficios a la parte denunciada, omitiendo cualquier otro trámite.

60. De su denuncia presentada ante la Dirección Jurídica municipal, derivó el oficio de fecha 21 de noviembre de 2018, dirigido a **DL**, signado por la **ING.**, entonces Directora de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de la Presidencia Municipal de Fresnillo, Zacatecas, en la que se le dio a conocer la **denuncia popular** presentada ante esa Dirección, por lo que le solicitó tuviera a bien llevar a cabo el trámite ante esa misma Dirección, de **constancia de compatibilidad urbanística municipal,** para determinar si el uso de suelo para la balconería es permitido, condicionado o prohibido, para lo cual le pedía escrituras, predial actualizado y plano del inmueble para el trámite en mención. Fundamentado su acto unilateral de autoridad en los artículos 777, 778, 779, 783, fracción XXIII, y XVIV del Código Municipal Reglamentario de Fresnillo, Zacatecas, así como los artículos 22 Fracción XXXVIII, y 134 del Código Urbano Para el Estado de Zacatecas. Y artículo 6 fracción II del Reglamento General de la Ley de Construcción para el Estado y Municipios de Zacatecas…” (Sic).

61. Ya en fecha 20 de febrero del 2020, dirigió el quejoso dirigió escrito a **SJ,** en ese momento, Síndica Municipal de Fresnillo, Zacatecas, por medio del cual se solicitó que le informara de la denuncia presentada ante la Dirección Jurídica y que finalmente fuera remitida a través de esa Sindicatura al Departamento de Desarrollo Urbano para su seguimiento correspondiente. Ello, debido a que no había recibido respuesta, sin embargo, seguía padeciendo, junto con su familia, agresiones por parte de los encargados y empleados del taller llamado […]”, las que incluso se presumen delictivas en las que se puso en riesgo la integridad del quejoso y se vio afectado su patrimonio; en el que reiteró que el giro comercial no contaba con ningún permiso, ni realizaba pago de impuestos, según le informó el propio personal de Plazas y Mercados de la Presidencia Municipal de Fresnillo, Zacatecas; por lo que solicitaba además la clausura del mismo, o en su defecto la reubicación lejos del domicilio.

62. En alcance al anterior escrito, el día 21 de junio de 2020, el quejoso remitió a la ex Síndica Municipal, nuevamente escrito, esta vez con fundamento en el procedimiento de “Denuncia popular” establecido en el Código Municipal Reglamentario de Fresnillo, Zacatecas; en el que le solicitó le proporcionara información del trámite que le diera cuenta desde el 20 de febrero del 2020, dando de nuevo a conocer que se desconocen los horarios y actividades del mencionado taller, cuestionando el cómo se les sigue permitiendo obstaculizar la vía pública, así como pintar en la calle, al parecer a través de una licencia que presuntamente fue otorgada por la Administración Municipal. Sin embargo, la propietaria **DL,** a pesar de que vía oficio, número (…) del expediente (…) por parte de la Dirección de Desarrollo Urbano Obras Públicas, se le solicitara constancia de compatibilidad urbanística municipal para poder determinar si el uso de suelo para la balconería en mención era permitido, condicionado o prohibido; pidiéndole además, copia simple de escritura, predial

actualizado y plano de inmueble para el trámite en mención; documento que fue fundado y motivado, fue omisa en ello.

63. Aunado a ello, el quejoso hizo alusión a que del oficio (…), expediente (…), la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas le solicitó a **H1**, encargado del taller, así como a la propietaria del inmueble, **DL,** poner solución en no obstaculizar la vía pública, en base a los artículos 65, fracción II, 67, fracciones I, incisos a) y b), lll incisos g) y h) del Reglamento General de la Ley de Construcción para el Estado de Zacatecas y sus Municipios. Asimismo, les informó que, al consumirse bebidas alcohólicas en el inmueble, se incurría en la infracción de lo establecido en los artículos 2, fracción IV, 7, fracción lll y 8 de la Ley sobre Bebidas Alcohólicas para el Estado de Zacatecas. Mientras que, en lo que respecta a horarios de trabajo y uso de suelo, les indicó que infringían los numerales 783, fracción XXIV, 784, fracciones I, II, VI y VIll; 793, 795, fracción I, 82 inciso e) y 297 del Código Municipal Reglamentario, por lo que se les invitó a establecer el orden para evitar sanciones de 1 a 1.000 salarios como lo marcan los preceptos 824 y 825 fracción I, del mismo Código. Motivo por el cual, se les exhortó para que, en lo sucesivo, se abstuvieran de realizar conductas que perturbaran la tranquilidad social, evitando así la imposición de sanciones administrativas, civiles o penales.

64. Derivado de lo anterior, **SJ,** en ese momento, Síndica Municipal de Fresnillo, Zacatecas suscribió el oficio (…) de fecha 24 de agosto de 2020, mediante el cual informó a **VD** que su denuncia será tramitada en la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de ese municipio, por ser la autoridad competente. Por tanto, en atención a la instrucción girada por la ex Síndica Municipal, se remitió el oficio número (…), signado por **AR4**, en ese entonces Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de la Presidencia Municipal de Fresnillo, Zacatecas, dirigido a **DL**, en fecha 15 de septiembre de 2020, mediante el cual le requirió lo siguiente:

> *"…en atención a queja presentada por parte del Ciudadano **VD**, ante la Sindicatura Municipal de este Ayuntamiento y turnada a esta Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas me dirijo a Usted para solicitarle de la manera más atenta tenga a bien llevar el trámite ante esta Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de Constancia de Compatibilidad Urbanística Municipal, para poder determinar si el uso de suelo para la balconería en mención es permitido, condicionado o prohibido…"* (Sic).

65. Ahora bien, con motivo de la queja que nos ocupa, **AR3,** ex Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de la Presidencia Municipal de Fresnillo, Zacatecas, éste rindió informe de autoridad en fecha 27 de mayo del 2019, en el que reconoció que el quejoso solicitó apoyo desde el año 2016. Anexando a su informe los oficios por medio de los cuales se dio respuesta, refiriendo que incluso se constituyó personal de esa Dirección en el taller de balconería "Alex" solicitándoles a los encargados que se llevara a cabo el trámite de la Constancia de Compatibilidad Urbanística Municipal por así haberlo ordenado la Síndico Municipal; considerando dicho funcionario que por ello se le ha dado respuesta a **VD** por parte del Ayuntamiento, agregando además que el quejoso tiene un conflicto personal con su vecino, quien es la persona a cargo del taller. Finalmente, el funcionario precisó que la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, se declaraba incompetente para resolver el asunto, pues se trata de un conflicto entre particulares que nos les corresponde resolver.

66. Luego entonces, tenemos por una lado una serie de solicitudes de intervención por parte de **VD** y, por parte de la autoridad, contamos con el reconocimiento de que efectivamente se ha solicitado su intervención, pero que se ha actuado y por tanto no se han violentado los derechos humanos del quejoso, ya que sí se remitieron sendos oficios a la dueña del local, e incluso se acudió por parte de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para darle a conocer a los encargados de balconería "Alex" que debían llevar a cabo el trámite de la Constancia de Compatibilidad Urbanística Municipal. Consecuentemente, la controversia radica en establecer si con lo actuado por la autoridad municipal es suficiente, en términos de las leyes de la materia.

67. Veamos, los hechos denunciados por el aquí quejoso ante las diversas áreas del Ayuntamiento de Fresnillo, fueron calificados por la propia autoridad como una "denuncia popular", en términos del Código Municipal Reglamentario de Fresnillo, Zacatecas, vigente desde el mes de julio del año 2004, complementándose las disposiciones de dicho ordenamiento, con las establecidas en el Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Fresnillo, publicado en el Suplemento del Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado,

Tomo CXXVIII, Número 63, correspondiente al día 8 de agosto del año 2018. No obstante, toda vez que la denuncia popular realizada por el quejoso, se dio en un primer momento en el año 2016, resulta aplicable el primer ordenamiento normativo en comento.

68. Cabe resaltar que, si bien de los hechos motivo de queja se advierte que la Administración Municipal 2018-2021 tomó una nueva denuncia de los hechos a **VD** a través de la Dirección Jurídica de esa municipalidad, la misma consistió en relatar y exhibir las solicitudes de intervención que realizó previamente a diversos departamentos del Municipio y a los que ya no se les dio continuidad. En consecuencia, según narró el quejoso, se siguieron presentado situaciones de irregularidades con la negociación que denuncia, por lo que, atentos a lo dispuesto por el artículo tercero transitorio del Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Fresnillo, debe entenderse como un procedimiento iniciado como anterior a dicho Bando, y como ya se indicó, su substanciación debe apegarse a lo dispuesto por el Código Municipal Reglamentario de Fresnillo, Zacatecas.

69. Consecuentemente, el citado Código establece en su artículo 829 que, cualquier persona física o moral, podrá denunciar ante la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, en adelante Dirección, cualquier infracción a las disposiciones del Código, en virtud de estar llevando a cabo construcciones, fraccionamientos, condominios, cambios de uso de suelo u otros aprovechamientos de inmuebles que contravengan las leyes o los Programas de Desarrollo Urbano Municipales aplicables y **originen un deterioro en la calidad de vida de los asentamientos humanos, su seguridad, su sosiego o la salud de los residentes de la zona, quienes tendrán derecho a exigir que se lleven a cabo las suspensiones, clausuras, demoliciones o modificaciones que sean necesarias para cumplir con los citados ordenamientos,** en especial los del propio Código Municipal Reglamentario.

70. Así pues, del apartado de pruebas, podemos observar que el quejoso presentó durante los años 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020, diversos escritos en los que señalaba los hechos motivo de denuncia y que las acciones implementadas por la autoridad en respuesta a sus denuncias, eran insuficientes. Dichos escritos, la autoridad administrativa los reconoció en todo momento como una denuncia popular, en términos del Código Municipal Reglamentario, en delante, el Código; siendo importante destacar que, además, se atendió por parte del denunciante, aquí quejoso, cada uno de los requisitos del artículo 830 del Código.

71. En consecuencia, la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de Fresnillo, Zacatecas, una vez que tuvo por recibida la denuncia popular, debió de integrar el expediente respectivo, practicar las inspecciones, visitas de verificación y cuanta diligencia considerara necesarias, substanciando de esa manera dicho procedimiento, luego, emitir la resolución correspondiente conforme a lo dispuesto por la legislación en materia urbana, con la obligación de notificarla al denunciante como respuesta a su petición. Ello, en términos del artículo 831 del Código, artículo que, además, establece que el desahogo del procedimiento **no excederá de treinta días naturales**, contados a partir de la fecha en que se reciba la denuncia, salvo que exista causa justificada que lo impida.

72. Dispuesto lo anterior, debemos de traer a esta resolución el concepto de debido proceso legal, voz que el Doctor Héctor Fix-Zamudio en el Diccionario Jurídico Mexicano, señala como el conjunto de condiciones y requisitos de carácter jurídico y procesal que son necesarios para poder afectar legalmente los derechos de los gobernados, lo que extiende el autor a otros sectores, entre ellos: a) la exigencia de un proceso previo en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento; b) derecho de garantía de audiencia; c) fundamentación y motivación de las resoluciones dictadas por autoridad competente, etc.[25] Si bien es cierto, el debido proceso legal se enfoca en los derechos de quien será procesado, también es verdad que salvaguarda los derechos de quien denuncia esos hechos, más allá de un derecho de petición, de administración de justicia, en el que atendiendo las garantías de las partes, se lleve un proceso previo, estricto y escrito, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento.

73. Por consiguiente, atendiendo a los hechos que nos ocupan, tenemos una denuncia que se ha continuado en el tiempo, ante la falta de respuesta al fondo de la misma, presentada por el aquí quejoso ante las autoridades administrativas municipales correspondientes de Fresnillo, Zacatecas, desde el año 2016; y se ha insistido en la conclusión del trámite en los

---

25 Obtenido de: Fix-Zamudio, Héctor, Voz: Debido proceso legal, *Diccionario Jurídico Mexicano,* México, Porrúa-UNAM, 1987, pp. 820-822.)

años subsecuentes ya advertidos, que ha cumplido con las formalidades para la interposición de lo que llama el Código “denuncia popular” y que además, la autoridad las ha admitido y entendido como tal, iniciado el procedimiento correspondiente. Estableciéndose en el Código sus etapas en el siguiente orden de prelación:

1. Presentación por escrito, con nombre y firma autógrafa, de una denuncia presentada por cualquier persona.
2. Recibida la denuncia, integración del expediente:
    2.1. Practicando inspecciones,
    2.2. Visitas de verificación
    2.3. Las diligencias necesarias
3. Emitir la resolución correspondiente.
4. Notificación al denunciante.

74. Como ya se dijo, el Código señala como término para el desahogo del procedimiento, que éste no excederá de 30 días naturales, contados a partir de la fecha de la denuncia, salvo que exista causa justificada que lo impida. Procedimiento del que la autoridad municipal, por ser los servidores públicos encargados de la aplicación del Código, tienen claro cuáles son sus funciones respecto a éste, lo que incluso se demuestra con los oficios que han remitido a lo largo del tiempo y que guardan relación con estos hechos, ya que en dichos oficios remitidos a la dueña del local donde se encuentra la negociación denunciada, así como a los encargados de la misma, los han fundamentado en los procesos que para ello establece dicho Código; por lo tanto, tienen claro las diligencias que había que seguir una vez presentada una denuncia.

75. Así, tenemos claro que la autoridad municipal recibió la denuncia como una de carácter popular, inició su procedimiento, requiriendo a la dueña del inmueble, así como a los representantes de la negociación, a fin de que tuviera a bien llevar a cabo el trámite ante esa Dirección para la emisión de la Constancia de Compatibilidad Urbanística Municipal, a efecto de poder determinar si el uso de suelo para la balconearía "Alex” (denunciada) era permitido, condicionado o prohibido, pidiéndole presentara en copias simples: escrituras, predial actualizado y plano del inmueble para el trámite en mención. Dicha autoridad, fundamentó su petición en los artículos 777, 778, 779, 783, fracción XXIII, y XVIV del Código Municipal Reglamentario de Fresnillo, Zacatecas; en los artículos 22 fracción XXXVIII, y 134 del Código Urbano para el Estado de Zacatecas; así como en el artículo 6, fracción II del Reglamento General de la Ley de Construcción para el Estado y Municipios de Zacatecas.

76. De la misma manera, solicitó al propietario y/o responsable del taller "Balconería Alex", no ocupar la vía pública con puertas, ventanas, portones y cualquier otro objeto relacionado con el trabajo que desempeña, esto, por generar molestias a los peatones que transitan por ese lugar, fundamentado legalmente por los artículos 618, 620 Fracción V, 622 y 625 del mismo Código Municipal Reglamentario de Fresnillo, Zac. Igualmente, en el oficio (…) emitido por la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas se le solicitó a **H1**, encargado del taller, así como a la propietaria del inmueble, **DL** no obstaculizar la vía pública, en base al artículo 65, fracción II, 67, fracciones I, incisos a), b), Ill incisos g), h), del Reglamento General de la Ley de Construcción para el Estado de Zacatecas y sus Municipios.

77. Igualmente, se les informó a través del mismo oficio que, al consumirse bebidas alcohólicas en el inmueble, se infringía lo establecido en el artículo 2 fracción IV, 7, fracción Ill y 8 de la Ley sobre Bebidas Alcohólicas para el Estado de Zacatecas. Mientras que, con relación a los horarios de trabajo y uso de suelo, se estaban infringiendo el art. 783, fracción XXIV, art. 784, fracción I, II, VI, VIll, art. 793, art. 795, fracción I, art. 82 inciso e). art. 297 del código municipal reglamentario, por lo que se les invitaba a establecer el orden para evitar sanciones de 1 a 1.000 salarios como lo marca el art. 824, 825 fracción I, del ya antes mencionado código reglamentario. Motivo por el cual, los exhortó para que en lo sucesivo se abstuvieran de realizar conductas que perturben la tranquilidad social, evitando así la imposición de sanciones administrativas, civiles o penales.

78. Sin embargo, dicha autoridad municipal, no aportó ningún elemento de prueba que permita determinar que efectivamente, se substanció el procedimiento respecto de las denuncias que de sus propios oficios se pueden advertir. Esto es, que además de hacer las solicitudes señaladas en los puntos anteriores, debió de continuar su proceso de investigación, lo que es una carga procesal que le correspondía, es decir, no es la parte denunciante la que está obligada a presentar las pruebas, aunque debe resaltarse que, en el

caso, **VD** acompañó a sus denuncias fotografías, videos y audios, sino que corresponde a la autoridad investigadora allegarse de pruebas que permitieran concluir si el inmueble cuenta con los permisos correspondientes para su funcionamiento y de no ser así, tomar las medidas administrativas necesarias y determinar lo conducente.

79. Aunado a ello, la autoridad está obligada a investigar si se obstruye la vía pública; si existen ruidos que excedan los decibeles permitidos; si se hace el pintado de puertas y ventanas con pistolas de aire o aerosoles que desplacen por el aire sus partículas y puedan dañar a personas o cosas; si la autoridad le ha establecido horarios específicos y si éstos los cumplen o no; si se trabaja en días domingos; si se toma en el lugar y se molesta a las personas; si se han cometido actos delictivos y de ser así qué responsabilidades administrativas les genera como responsables de esa empresa; etcétera. Esto es, atender a las denuncias expuestas por el quejoso, resolviendo de esa manera el fondo del asunto y no limitarse a remitir un oficio por año, insistiendo en que la propietaria debe acercarse a la autoridad a realizar el trámite que determine la compatibilidad urbanística.

80. Dicho, en otros términos, atendiendo a las atribuciones y obligaciones que le genera el Código a la autoridad involucrada, lo conducente es que la autoridad administrativa realizara una estrategia de investigación en la que acudiera personal de esa Dirección o incluso con el apoyo de otras autoridades municipales a realizar las acciones que el propio Código le obliga, como son practicar inspecciones o realizar visitas de verificación; es decir, realizar cuanta diligencia fuera necesaria para contar con los elementos de prueba que fehacientemente demostraran lo dicho por el quejoso o bien por el contrario, que no se violentan ningún precepto legal aplicable.

81. Sin embargo, se insiste, ello no fue así, pues desde 2016 y hasta 2020, los Titulares de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, se limitaron a emitir oficios en los que se solicitaba de la manera más atenta, pero a éstos no se les dio seguimiento, cuando era su obligación hacerlo, sobre todo si no obtuvieron respuesta de los ciudadanos a los que iban dirigidos y en dichos oficios se les había advertido de las faltas en que incurrían y las posibles sanciones. Basta el estudio del propio Código para advertir que la autoridad involucrada contaba con el fundamento legal para intervenir de fondo en los hechos que fueron denunciados y ratificados a través del tiempo. Tal es el caso del artículo 2 de dicho ordenamiento, que señala que el Código municipal es de orden e interés público y de observancia obligatoria para todos los ciudadanos de Fresnillo.

82. Dicho Código, establece las normas reglamentarias del Gobierno Municipal, su Administración Pública Municipal, e impone las sanciones a quien viole el mismo. En su artículo 8, fracciones I, II y XI, refieren que el municipio de Fresnillo tiene como fin **proporcionar la tranquilidad y seguridad a las personas, incluyendo sus bienes** dentro de su territorio; **garantizar** la moral y **el orden** público y tiene como funciones especiales la vigilancia, defensa social, prevención de los delitos, e infracciones y faltas al Bando y Reglamentos vigentes; de tal suerte que debe proveer los medios para la aplicación de la justicia en el marco de su competencia.

83. Por otro lado, en lo que concierne específicamente a la Dirección General de Obras y Servicios Públicos, en el numeral 152, fracción X, el Código establece que le corresponde regular y vigilar la emisión de ruidos que afecten el medio ambiente, así como la salud de las personas. Mientras que el precepto 154, establece las funciones de la Dirección General de Desarrollo Urbano, como son: I, ejercer las atribuciones que otorga al municipio el Código Urbano para el Estado; VI. Administrar el control urbano, autorizando: a). Alineamiento y compatibilidad urbanística; VII. Determinar el tipo de construcciones que se pueden edificar en el municipio; IX. Inspeccionar obras, edificios y construcciones en general, con el objeto de comprobar en su caso el cumplimiento de las disposiciones legales respectivas y de las propias autorizaciones expedidas por su parte; X. **Verificar el uso que se está dado a un predio, área, edificio o construcción, y que éste se ajuste a las características previamente registradas y autorizadas; XV. Imponer sanciones a las que se hagan acreedores los infractores** y XVI. Solicitar el auxilio de la fuerza pública, cuando fuera necesario para hacer cumplir sus determinaciones.

84. Por otra parte, respecto del comercio establecido, el Código señala en los artículos 307, 308, 312, respectivamente, que los habitantes del Municipio podrán desempeñar actividades industriales, comerciales y de servicios, con apego a las disposiciones legales aplicables;

pero, para el desarrollo de tales actividades, deberán contar con licencia de funcionamiento expedida por la Autoridad Municipal o de autoridad competente, además de que los horarios para funcionamiento los determina el Ayuntamiento, tomando en consideración el giro que desempeñen. Ahora bien, con relación a las modalidades de los tipos de comercio en el Municipio, para el caso que nos ocupa, resulta aplicable la fracción I del artículo 329, relativa al comercio establecido o permanente. Asimismo, por lo que hace a las Concesiones, Licencias y Permisos, dice el numeral 342 que **para el funcionamiento de cualquier giro comercial o de prestación de servicios** dentro del municipio, sea cual fuere la modalidad o características de la actividad, **se requiere autorización expresa otorgada y expedida por la Secretaría del Ayuntamiento** siendo el artículo 344 el que define lo que se entiende por licencia y el numeral 346 contiene los requisitos para obtención de la misma.

85. Mientras tanto, en lo atinente a los horarios y suspensión de labores, el artículo 360 refiere que los establecimientos comerciales y de prestación de servicios, deberán funcionar de acuerdo al **horario establecido por el Ayuntamiento** y el 361, establece las reglas para ampliación de horario. Igualmente, en cuanto a la organización y obligaciones de los comerciantes, el artículo 367 estatuye que todo comerciante se sujetará a las obligaciones siguientes:

> I. registrar su negocio,
> II. Cuidar el estado de higiene y limpieza y adoptar las medidas convenientes de seguridad;
> VI. Respetar las fechas de cierre y los horarios correspondientes.

86. De otro lado, con relación a los actos prohibidos para los comerciantes, para el tema específico que nos ocupa, el artículo 384, señala que **todo comerciante se abstendrá** de realizar, los actos siguientes:

> II. **Operar aparatos de sonido a volumen inmoderado**
> VI. **usar la vía pública para realizar trabajados de […] herrería**
> VIII. **colocar cualquier artículo que limite los espacios públicos u obstaculice el tránsito de peatones, vías o lugares de acceso en […] la vía pública en general.**
> XIV. **Obstruir el tránsito de vehículos o personas.**

87. Dicho Código, establece de manera clara las infracciones y sanciones en un apartado especial, a guisa de ejemplo, el numeral 396 contienen las causas de revocación de licencia, señalando en su fracción VII que una de las causas para ello, será cuando se perjudique el interés público. Mientras que el diverso 397 complementa y estatuye que, además, procede:

> I. suspensión temporal de la licencia en caso de reincidencia
> III. Clausura definitiva del establecimiento.
> IV. Arresto administrativo hasta por 36 horas

88. Importante resulta lo dispuesto en el 399 del Código, en el que separa los procesos administrativos de responsabilidad de los hechos delictivos, advirtiendo que en la comisión de un ilícito puede tipificarse además varias infracciones que pueden calificarse y sancionarse de manera simultánea o por separado, lo que deja claro que pueden llevarse por separados dichos procesos sin que ello implique sancionar dos veces por los mismos hechos. En tal sentido, cabe abrir un paréntesis y establecer que en el caso que nos ocupa, si bien se han producido actos que se presumen delictivos y que por eso se señala en el informe de autoridad del Director que no resulta de su competencia; la realidad es que atendiendo a lo dispuesto en el precepto señalado, tenemos que, por el contrario, el hecho de que se den actos delictivos en los que se involucren los dueños o encargados de un giro comercial o prestadores de servicios, se advierte claramente que pueden llevarse por separado y su interpretación apunta a que el propio hecho delictivo puede generar varias infracciones que pueden calificarse y sancionarse. Lo que es procedente, en tanto que es de explorado derecho que, de acuerdo con los criterios sostenidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en ese sentido, lo establecido en ese numeral 399 del Código, no violenta al principio de *Non Bis in Idem,* entre otras cosas, al provenir de leyes distintas y que el bien protegido es distinto.

89. Por ello, aquí no se prevé la incompetencia que refirió en su informe de autoridad **AR3**, en ese entonces, Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de la Presidencia Municipal de Fresnillo, Zacatecas, recibido en esta Comisión sino por el contrario, genera condiciones que permiten y obligan la legal intervención de la autoridad municipal, al presentarse hechos delictivos que involucran a los encargados o dueños de los giros

comerciales o prestadores de servicios. Pero, además, refiere que tal condición puede generar varias infracciones que pueden calificarse y sancionarse por separado y de manera simultánea.

90. Ahora bien, el artículo 568, señala como una generalidad, que todas las actividades de comercio en el municipio se sujetarán al horario de 7 a 22 horas, **previa** licencia o permiso, de lunes a sábado; mientras que en su fracción VI indica que el expendio de materiales de construcción y madererías será de 7 a 19, lunes a sábado; articulado que no contempla un horario restringido para herrería, pero debe interpretarse como un material de construcción. Del mismo modo, señala el Código la posibilidad de **ampliación de horario** en su artículo 570, párrafo segundo, pero precisa que **debe de haber una autorización para ello** y se debe cubrir el pago del permiso correspondiente. Sin embargo, en el caso que nos ocupa, la autoridad no probó a este Organismo cuál es el horario autorizado para el funcionamiento de la balconería "Alex", incluso, como ya se ha evidenciado a lo largo de la presente resolución, no logró acreditar siquiera que dicho establecimiento opere cumpliendo con las disposiciones normativas correspondientes, en el caso concreto, causando perjuicio con ello al quejoso y su familia, ante la incipiente actuación de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas.

91. En relación con lo anterior, se tiene que el artículo 579 del propio Código, reza que las autoridades municipales tienen **facultades para poner en práctica las medidas que crea convenientes para evitar la violencia**, para lo que deberá de coordinarse con las dependencias correspondientes. Sin embargo, este Organismo reitera que, de las constancias que obran en autos, la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de Fresnillo, Zacatecas, no probó haber actuado para atender de manera diligente la problemática expuesta por **VD**, pese a que, de sus propios oficios se advierten diversos apercibimientos a la dueña y encargados de la balconería "Alex"; sin embargo, no se advierte que se hayan aplicado las sanciones con las cuales se apercibió, omisión que de ningún modo, resulta conveniente para evitar la violencia social.

92. Por otra parte, de lo relacionado con vía pública municipal, se tiene que el artículo 616 del Código, la define como: *"todo espacio de uso común que, por la costumbre o disposición de autoridad competente, se encuentre destinado al libre tránsito, de conformidad con este Código Municipal Reglamentario y demás leyes y reglamentos de la materia, así como todo inmueble que de hecho se utilice para este fin…"* (Sic). En tanto que, el numeral 620, señala las restricciones, advirtiendo que no se autoriza el uso de las vías públicas en los siguientes casos: *"…V. Para aquellos otros fines que la Dirección General de Desarrollo Urbano considere contrarios al interés público…".* Entonces pues, es importante resaltar que la clasificación, características y funciones de las vías públicas municipales, se encuentran perfectamente definidas, y que por lo tanto el quehacer de la autoridad respecto a determinar la compatibilidad urbanística del inmueble, también se encuentran delimitadas por el propio Código, así, el artículo 630, las clasifica en:

I. Vialidades primarias;
II. Calles colectoras;
III. Calles locales;
IV Andadores.

93. A su vez, las características de las vialidades colectoras las establece el artículo 632, fracción IV, que indica que éstas son las que enlazan las unidades vecinales entre sí, y por lo que hace a la autorización, control y vigilancia de los usos de suelo, se define el uso de suelo en su artículo 783, fracción V que estatuye que el uso de suelo consiste en el fin particular a que podrán dedicarse determinadas zonas o los inmuebles de un centro de población; mientras que la fracción XXIV, señala a las **balconerías**, herrerías y pailerías, y que éstas **se pueden ubicar en vialidades de tipo colector**, **siempre y cuando el fraccionamiento o colonia esté catalogada como de tipo popular o de interés social.** También se pueden colocar en vialidades secundarias, primarias y regionales, pero no en vialidades locales, independiente del fraccionamiento de que se trate.

94. En relación con lo anterior, este Organismo advierte de la integración del expediente que motiva la presente Recomendación, que la Autoridad Municipal fue omisa en cuanto a las omisiones en que a su vez han incurrido la dueña y los encargados de la balconería "Alex", pues pese a los múltiples requerimientos para que se regularizara su operación, no se ha actuado hasta la fecha en consecuencia. De la propia documentación aportada por las 2 últimas personas que han ocupado la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de

Fresnillo, Zacatecas, esta Comisión advierte que dicha balconería, no cuenta con **constancia de compatibilidad urbanística, con la constancia de determinación de uso de suelo, con el dictamen de impacto ambiental, ni con el dictamen de impacto urbano**. Empero, a pesar de ello, sigue funcionando sin mayor problema, generando así que no se haya garantizado a **VD** su derecho de acceso a la justicia en sede administrativa, al no atenderse de manera puntual la denuncia popular promovida, con lo cual, se causa también un agravio a su derecho al debido proceso, pues hasta la fecha no ha recibido una resolución recaída a dicha denuncia, y la autoridad, no ha justificado el porqué de dicha omisión.

95. En lo atinente, resulta conveniente resaltar el contenido del artículo 784 del Código en comento, ya que se establecen en éste las atribuciones de la Dirección para autorizar, negar o condicionar las constancias de compatibilidad urbanística; determinar los usos o destinos de edificaciones, como lo son, permitidos, condicionados o prohibidos; usos que resultan de las constancias de alineamiento y compatibilidad urbanística. Siendo una función esencial, también de la Dirección, vigilar el cumplimiento de lo señalado en las constancias de alineamiento y compatibilidad urbanística. Así, dicho numeral precisa que, entre las atribuciones que la Dirección de Desarrollo Urbano, se encuentran:

> I. **Autorizar, negar o condicionar las constancias de compatibilidad urbanística.**
> III. Determinar los usos o destinos de áreas, predios o edificaciones **permitidos, condicionados o prohibidos**, a través de las **constancias de alineamiento y compatibilidad urbanística.**
> Vi. Vigilar que los particulares cumplan con lo señalando en las constancias de alineamiento y compatibilidad urbanística.

96. Además, el Código establece claramente los requisitos para solicitar la autorización de constancia de alineamiento en su artículo 785, que determina que toda persona, podrá solicitar autorización de alineamiento y compatibilidad y la documentación que debe de presentar, entre otras, dice su fracción VIII que, "…cuando el uso de suelo propuesto sea distinto a la actividad habitacional, se debe presentar cuestionario contestado de información básica ambiental…". Es claro el Código también en establecer las condiciones para expedir las autorizaciones de alineamientos y compatibilidad urbanística, señalando el artículo 789 que deben de apegarse, entre otras cosas, tratándose de las constancias no autorizadas y/o condicionadas: "…a) respetar las condiciones señaladas por la Dirección para su funcionamiento, según sea el giro, actividad o tipo de construcción; y para lo que nos ocupa, el c) **señala que de no cumplir con las condiciones, se les impondrá sanción por la Dirección.**

97. En relación con el tópico anterior, el Código establece también en su artículo 795, párrafo segundo, que cuando un edificio o predio se utilice total o parcialmente para uso diferente al autorizado, sin haber obtenido previamente la constancia de alineamiento y compatibilidad urbanística, la Dirección ordenará en BASE AL DICTÁMEN TÉCNICO que al efecto se realice lo siguiente:

> I. Restitución inmediata al uso aprobado.
> II. los trabajos que sean necesarios para el correcto funcionamiento del inmueble y restitución aprobada
> Lo anterior independiente de las sanciones a que haya lugar.

98. Aunado a ello, el numeral 796 detalla que, las constancias de alineamiento y compatibilidad urbanística, tienen vigencia de un año. Asimismo, es de resaltarse lo dispuesto por el 797, consistente en que, si el establecimiento funciona **sin contar con la correspondiente constancia de alineamiento y compatibilidad urbanística**, la Dirección por conducto de su **titular**, podrá suscribir un Convenio de Reubicación con el propietario o representante legal; se le otorgará un plazo para que procede a la reubicación a un lugar compatible. Lo cual, evidentemente no ha acontecido, si tomamos en consideración que, entre las solicitudes que la Dirección ha hecho a la dueña y encargado de la balconería "Alex", se encuentra precisamente la de regularizarse y obtener constancia de alineamiento y compatibilidad urbanística.

99. Por otra parte, en los artículos 807, 808, 809 y 810, el Código refiere los porcentajes que podrán ocuparse con áreas comerciales y de servicios dentro de los fraccionamientos y colonias residenciales; así como en qué tipos de vialidades se puede establecer la actividad comercial inmediata, como son colectoras, secundarias, primarias y regionales, esto es que

podrá existir uso diferente al habitacional, siempre que no se altere el contexto existente y no se provoque alteración al flujo vehicular; y lo más importante, que esto se determina por **dictamen de la Dirección**. Lo mismo se describe respecto de los fraccionamientos habitacionales urbanos de interés social, en la que debe resaltarse que el numeral 809, estipula en su fracción III que se podrá autorizar comercio tipo periódico sobre vialidades colectoras y en algunos casos servicios de tipo doméstico. En tanto que, en su fracción IV indica que queda prohibido el uso o destino que no sea compatible con la zona, y en la fracción V que en caso de que se encuentren establecidos usos de suelo que no sean compatibles a la zona de ubicación o que sean **generadoras de ruido mayor al establecido**, quedará **condicionado a su reubicación** en zonas aptas para ello. Aunado a ello, el artículo 817, refiere que, en vialidades colectoras, se permitirá sobre de ellas, comercio inmediato y eventual **siempre que no se utilice la vía pública para trabajar y/o invada esta con objetos que obstruyan el libre tránsito y se cuente con los cajones de estacionamiento correspondientes**.

100. El Código, contiene un título especial para las medidas de seguridad, infracciones y sanciones, esto es, de las facultades de la Dirección para sancionar y el tipo de sanción aplicable, por ejemplo, en lo conducente:

- **Artículo 823**. medidas de seguridad:

I. Suspensión de obra y servicios
II. Clausura total o parcial
III. Desocupación del inmueble

- **Artículo 825.** Sanciones:

I. Amonestación verbal o escrita,
II. Clausura temporal o definitiva, total o parcial
III. Multa
…
V. prohibición de realizar determinados actos u obras
Vi. Arresto hasta por 36 horas.

101. Ahora bien, como ya se describió, se cuenta con la figura de la “Denuncia Popular”, en sus artículos 829, 830 y 831, figura a la que, como ya también se aludió, recurrió el quejoso a efecto de que la Dirección realizara las acciones conducentes y necesarias, tendentes a verificar las condiciones bajo las cuales opera la balconería “Alex”, sin que hasta la fecha se haya agotado el procedimiento, tal y como se ha evidenciado a lo largo de la presente Recomendación, omisión que, en el caso concreto, ha impactado de manera directa en la esfera de derechos del quejoso y coagraviados.

102. Importante es también citar el artículo 878, que establece las facultades y obligaciones de las autoridades municipales en su relación con los particulares, entre otras: “…II. Proporcionar información y orientación acerca de los requisitos jurídicos y técnicos que las disposiciones vigentes impongan a las actuaciones o solicitudes que se propongan realizar; IV. Facilitar el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones […]; V. Dictar todas las resoluciones por escrito de cuanta petición se formule”. Por lo que hace a las acciones que refiere el Código, pueden realizarse para una investigación, señala los procedimientos, facultades y atribuciones de la autoridad para realizar verificación e inspección. Finalmente, de los numerales 911, al 928, establece también, las reglas para la imposición de sanciones y medidas de seguridad.

103. De los preceptos anteriores, podemos concluir que la Dirección, cuenta con el andamiaje jurídico que les permitía garantizar al quejoso su derecho de acceso a la justicia, siguiendo el debido proceso, pero, sobre todo, con todos los elementos que les establecían los procesos y las obligaciones y atribuciones para llevarlos a cabo, sin embargo, esto no se realizó, se limitaron a emitir oficios preventivos, pero que no generaron ninguna otra acción, siendo omisos al cumplimiento de sus obligaciones que como titulares de esas áreas les correspondía.

104. A mayor abundamiento, se realizaron acciones tendientes a que se demostrara el tipo de uso de suelo, pero lo hicieron solicitando a la propietaria del predio se acercara a realizar el procedimiento correspondiente, cuando lo que debieron de hacer es integrar el expediente y realizar toda acción encaminada a determinar si el inmueble o predio, primeramente, tiene las licencias de alineación y compatibilidad urbanística, de no ser así obligarlos en términos de la Ley y del Código Urbano Estatal, a hacer las solicitudes correspondientes y en su

momento emitir los dictámenes técnicos para determinar lo conducente y en caso de negarse tales licencias, el uso de suelo o cambio del mismo, iniciar el procedimiento de reubicación.

105. Dichas visitas de inspección y verificación, además de ser para solicitar las licencias correspondientes, por las atribuciones que les da el Código, permiten también inspeccionar y verificar respecto de todos los demás hechos señalados por el denunciante puntalmente y de las que aportó pruebas de ellos, sin que de las mismas se pronunciara la Dirección. Además, de que de su informe de autoridad no se desprende acción alguna encaminada a inspeccionar y/o verificar si se estaban violentando las disposiciones normativas aplicables. Los procedimientos municipales administrativos debieron generarse sobre la dueña del inmueble o predio, pero también sobre los arrendatarios ya que también están facultados para solicitar los permisos, licencias correspondientes, sin embargo, su informe solo señala que se atendió lo pedido por el denunciante y que acudió personal del municipio a esa empresa a solicitarles se sujetaran al proceso de certificación de no contar con ella.

106. En tal sentido, tenemos un denunciante que ha presentado documentación que acredita las diversas ocasiones en que ha solicitado la intervención municipal desde hace varios años y que a cada escrito acompaña los signados por los anteriores Directores; lo que no fue demostrado es que la autoridad responsable agotara el procedimiento que sí tuvo a bien iniciar, pero que no substanció el mismo, siendo omisa en cumplir con sus obligaciones. Además, el solicitante tuvo a bien señalarle a la autoridad municipal que en caso de que no fuera la autoridad competente, se le informara a qué autoridad debía de dirigir sus escritos, por lo que, en caso de haberse considerado incompetencia, como lo refirió **AR3**, ex Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de la Presidencia Municipal de Fresnillo, Zacatecas, no debió solo aludir dicha incompetencia, sino orientar a **VD.** No obstante, este Organismo considera que dicho ex funcionario, y **AR4**, quien también ostentó la Titularidad del Departamento al cual dirigió el quejoso sus peticiones, tenían la obligación de resolver precisamente el procedimiento iniciado con la denuncia popular, por escrito, fundando y motivando su resolución y si el denunciante aportó medios de prueba, esa autoridad administrativa debió de pronunciarse sobre las mismas, además del resultado de las generadas por sus propias acciones de investigación, pero esto no sucedió.

107. Debe resaltarse que el solicitante siempre respetó su obligación constitucional al ejercer el derecho de petición por escrito, de manera pacífica, pero aún ante ello, no se le dio respuesta y, si bien se ha respondido emitiendo los oficios que ya hemos advertido, éstos no sustancian el procedimiento establecido por el Código y que por tanto se tienen como obligaciones de los servidores públicos municipales. Pero, además, ante la evidencia que a lo largo de los años el aquí quejoso ha buscado se le administre justicia y que los denunciados no han atendido lo solicitado por la autoridad y no se tiene la certeza de que cumplen o no con lo dispuesto en el Código y que ha sido ya descrito, no se ha emitido ninguna acción tendiente a determinar si procedía o no sancionar a los ciudadanos omisos, y denunciados. Lo que evidentemente se deriva de su omisión de llevar los procedimientos administrativos a que haya lugar, por lo que su derecho de petición debe entenderse igualmente violentado.

108. Además, la autoridad involucrada, debió de atender la situación de manera integral, no solo decir que el quejoso tiene problemas con la persona a quien denuncia, por el contrario, debió de conjuntar esfuerzos con las autoridades administrativas municipales correspondientes, entre éstas el Juzgado Comunitario, al que debió de darle cuenta de lo sucedido; así como con personal de Plazas y Mercados, de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, entre otras. De haber tenido comunicación con el Juzgado Comunitario, pudo haber dado cuenta del antecedente que existe de los hechos, en los que se llegó a un acuerdo, en el que, entre otras cosas, destaca el reconocimiento de las agresiones de los dueños del inmueble y de las irregularidades como obstrucción de la vía pública.

109. Asimismo, como se observa de los artículos citados, la autoridad municipal tiene normado los procedimientos para atender el fondo del asunto, esto es, si el giro comercial, está ubicado en un lugar permitido, si su función debe ser restringida, si se cumplen horarios laborales correctos, ya que el denunciante señala que se trabaja incluso los días domingos, por lo que la Dirección puede apoyarse de la fuerza pública para verificar los horarios, como así lo hace con otros giros comerciales, a guisa ejemplificativa, los de venta de bebidas

embriagantes. Esto es, que se resuelve en primer lugar la legalidad de su ubicación para ese tipo de giro comercial y emitir las sanciones correspondientes de ser procedentes.

110. Luego, atendiendo a que esa autoridad municipal debe de buscar en todo momento la paz y la tranquilidad de sus habitantes, su función al sustanciar el procedimiento era buscar las medidas correspondientes para que se evitaran actos de agresión y de presentarse éstos, actuar en consecuencia, atendiendo a lo ya desarrollado en párrafos anteriores en la que se analizó lo dispuesto por el artículo 399 del Código, que separa los procesos administrativos de responsabilidad de los hechos delictivos, advirtiendo que en la comisión de un ilícito puede tipificarse además varias infracciones que pueden calificarse y sancionarse simultáneamente y en forma separada, y no asegurar como lo hace el informe de autoridad, que los hechos no son de la competencia de esa Dirección.

111. Consiguientemente, tenemos fehacientemente demostrado que la autoridad municipal involucrada ha sido omisa, al no atender el fondo de las denuncias planteadas, cuando la normatividad contempla los procedimientos y los términos establecidos para ello, los que, si recordamos que para su desahogo el procedimiento no excederá de treinta días naturales, los que se contabilizan desde la fecha de recibida la denuncia, salvo que exista causa justificada que lo impida; éstos fueron extremadamente rebasados y, la autoridad municipal, no advirtió de alguna causa de justificación para extender el término.

112. Determinada las violaciones a los derechos fundamentales del aquí quejoso por parte de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, es menester de esta Comisión argumentar las razones por las que los servidores públicos señalados, **AR3** y **AR4**, quienes han fungido como Directores de Desarrollo y Obras Públicas de la Presidencia Municipal de Fresnillo, Zacatecas, en la Administración Municipal de Fresnillo, Zacatecas, incurrieron en la vulneración de tales derechos, en agravio del quejoso. Primeramente, se tiene que la queja se dirigió en contra de **AR3**, por la omisión de dar seguimiento al trámite que se tenía ante esa Dirección, no obstante, resulta involucrado también quien fuera titular de esa Dirección **AR4**, en consideración de lo expuesto en párrafos subsecuentes.

113. Como ha quejado puntualmente establecido, el quejoso solicitó desde el año 2016, el apoyo de la autoridad municipal para que se regulara al taller de balconería denominado “Alex”, ubicado en (…), siendo la propietaria del lugar **DL**; tal como lo aceptó y describió **AR3** en su informe de autoridad de fecha 27 de mayo de 2019, en el que además se refirió a la incompetencia del Departamento a su cargo para resolver la problemática planteada por el quejoso. El referido informe destaca los oficios que fueron generados en los años siguientes, el (…) del expediente (…), oficios (…) y (…) del expediente (…), los oficios (…), expediente (…) y los oficios (…) y (…).

114. Por lo que hace a **AR3**, se tiene que éste contaba con todo el antecedente, como así lo señala en su informe, sin embargo, en lugar de advertir las omisiones generadas a lo largo de los años y actuar en consecuencia y substanciar debidamente el procedimiento, su determinación es que con los oficios que fueron emitidos por esa Dirección a lo largo de los años, se tuvo por atendido al darle respuesta y la atención necesaria al denunciante, dando cumplimiento a las peticiones realizadas al Ayuntamiento, el que considera es un conflicto particular con unos vecinos, que son las personas a cargo del taller denunciado y por lo tanto declaró su incompetencia.

115. Siendo igualmente omiso en substanciar el procedimiento señalado en el Código para las denuncias populares, sin que realizara acciones que atendieran las denuncias, y si bien señala que se les dio respuesta y la atención necesaria y se dio cumplimiento a las peticiones realizadas, no aportó prueba alguna que lo demostrara ya que los oficios que anexó como prueba, solo demuestran el inicio del procedimiento, pero no su debida substanciación, omitiendo todo lo ordenado por el Código y que ya ha sido descrito con anterioridad al hacer el análisis del articulado del mismo.

116. Resultado particularmente responsable **AR4**, en atención a que se cuenta con el oficio número (…) de fecha 12 de agosto 2020, en el que la Síndica Municipal, le instruyó que, en su calidad de Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de la Presidencia Municipal de Fresnillo, Zacatecas, en atención a la solicitud realizada por **VD**, integrara el expediente de denuncia, se realizaran las inspecciones y diligencias necesarias y una vez hecho lo anterior, emitiera su resolución correspondiente; lo anterior con fundamento en lo establecido en los

artículos 777, 778, 912 y demás relativos y aplicables del Código Municipal Reglamentario de Fresnillo, Zacatecas; solicitando, además, que se notificara la resolución al quejoso, ya sea en su domicilio particular descrito al inicio del oficio anexo o a su celular, proporcionándoselo en el mismo escrito. Situación que la Síndico Municipal dio a conocer al denunciante mediante oficio (…) de fecha 24 de agosto de 2020.

117. Sin embargo, de las acciones instruidas por la Síndico Municipal a **AR4**, se tiene que solo emitió el oficio (…), dirigido a **DL**, en fecha 15 de septiembre de 2020, en la que solo le solicita de la manera más atenta tenga a bien llevar el trámite ante esta Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de Constancia de Compatibilidad Urbanística Municipal, para poder determinar si el uso de suelo para la balconería en mención es permitido, condicionado o prohibido, sin darle mayor continuidad al procedimiento, aún y que le fuera precisado que debía de iniciar la integración de expediente de denuncia, se realizaran las inspecciones y diligencias necesarias y luego se emitiera resolución y que ésta le fuera notificado al denunciante y se le dio el fundamento para dicho procedimiento.

118. Omisión que como se ha analizado, se configura en atención a que el hecho de remitir un oficio para invitar a los denunciados a llevar un procedimiento que le corresponde a la autoridad administrativa investigar y sancionar, conlleva a que, en caso de que no se tenga cumplido por quien tiene dicha negociación, realizar acciones coercitivas que los obliguen a su cumplimiento y de no contar con los requisitos señalados en el Código, determinar la clausura o reubicación, en su caso. Lo cual, se acredita de manera fehaciente con su propio informe de autoridad, recibido por este Organismo en fecha 19 de julio de 2021, en el cual, de manera tajante, señaló que la Dirección a su cargo, no puede emitir resolución favorable al quejoso, debido al conflicto entre éste y la persona encargada de “balconería Alex”. Siendo importante especificar que, el hecho de desahogar el debido procedimiento que debió incoar, no necesariamente significa que esta deba resultar favorable a los intereses de **VD**, ya que su obligación no consiste en ello, sino, meramente, en desahogar el debido procedimiento ya señalado a lo largo de esta Recomendación.

119. En ese orden de ideas, tenemos que, ambos servidores públicos, resultan responsables por las omisiones advertidas, ya que en su calidad precisamente de servidores públicos están obligados a observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público y para la efectiva aplicación de esos principios debe atender directrices como el actuar conforme a lo que las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas les atribuyen a su empleo, cargo o comisión, por lo que deben conocer y cumplir las disposiciones que regulan el ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones, tal como lo establece el artículo 7º de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y toda vez que fueron omisos de ello, su actuar se aleja del debido proceso, de la garantía de audiencia y del derecho de petición, consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

120. Por lo que, además de los procedimientos administrativos de responsabilidad que se generen con tales omisiones, la Autoridad Municipal, por conducto del Presidente, deberá ordenar la inmediata realización de las acciones tendientes a resolver el fondo del asunto, consistentes en realizar las diligencias que resulten pertinentes para substanciar el procedimiento ya descrito, en los términos de ley, el que deberá ser notificado al denunciante, señalando de manera clara los recursos que señala la ley en caso de inconformidad con dicha resolución, así como los términos para hacerlos valer y la autoridad ante que proceden.

VIII. SOBRE LOS DERECHOS NO VULNERADOS.

121. En su escrito de queja, **VD**, señala como autoridad responsable a **ANR4**, entonces Juez Comunitaria del municipio de Fresnillo, Zacatecas; refiriendo que por sugerencia de la también entonces Síndica Municipal, acudió con dicha servidora pública para que se atendiera la problemática que persistía con **H1 y H2**; por lo que al acudir el 04 de noviembre de 2018, la misma lo atendió y le dio un citatorio para que lo entregara a **DL**, a fin de que se presentara ante esa autoridad municipal el día 13 de diciembre de 2018; empero, ésta no se presentó, lo que sucedió en dos ocasiones más.

122. En vista de lo anterior, la Juez Comunitaria determinó que acudiría a realizar una visita domiciliaria a la dueña del local, por lo que citó para ello al denunciante para que también se apersonara, siendo el día 15 de febrero de 2019, sin embargo, refiere que al llegar al Juzgado, ya se encontraba ahí **H1** y no la dueña del local, por lo que ya no supo que hacer, considerando que la Juez Comunitaria lo dejó en estado de indefensión, ya que, a su parecer, estaba en riesgo su integridad física, pues dicha persona en diversas ocasiones ha atentado contra su vida. El quejoso manifestó que, en el lugar, **H1**, realizó una llamada telefónica a **I1**, quien es su amigo, y le dijo que estaba junto con la Jueza Comunitaria, por lo que de inmediato le pasó la llamada a **ANR4**.

123. Explicó que él escuchó que la persona que decía ser **I1** hablaba mal de su persona y que la Jueza Comunitaria decía que ya se iba a arreglar la situación; por lo que una vez que colgó la llamada, la Jueza Comunitario procedió a realizar un Convenio en materia civil y de infracciones con número de expediente (…), con cuyas cláusulas estipuladas por la Jueza no estaba de acuerdo, pero al verse desprotegido en todos los aspectos, procedió a firmar involuntariamente el mismo, pues lo único, que quería era retirarse del lugar ya que temía por su integridad; razón por la cual, pidió que por esos hechos se sancionara a **ANR4** conforme a derecho.

124. Para probar sus manifestaciones, **VD**, aportó la grabación de un audio que según afirmó, corresponde a la grabación de la llamada sostenida entre **ANR4** y el **SR. I1**; circunstancia que, evidentemente, por el contexto de la grabación, no pudo ser corroborada por esta Comisión, ya que, de la inspección del disco compacto que contiene la grabación, solo se advirtió la voz de una persona del sexo femenino, no así la de un interlocutor; motivo por el cual, no es posible siquiera determinar si la grabación corresponde a una llamada telefónica. Al respecto, este Organismo resuelve que, el hecho de que el quejoso no haya sido partícipe de esa conversación, (de la cual, dicho sea de paso, no se advierte en ningún momento actuación desplegada por la autoridad, que importe la violación de sus derechos humanos), conlleva la ilegalidad en la obtención de la grabación.

125. Como sustento de lo anterior, resulta aplicable la jurisprudencia publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro XIX, abril de 2013, Tomo I, Pág. 357, Registro 159859, Materia Constitucional, de rubro y texto siguientes:

> "**DERECHO A LA INVIOLABILIDAD DE LAS COMUNICACIONES PRIVADAS. SE IMPONE SÓLO FRENTE A TERCEROS AJENOS A LA COMUNICACIÓN.**
> La reserva de las comunicaciones, previstas en el artículo 16, párrafos decimosegundo y décimo tercero, de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos**, se impone sólo frente a terceros ajenos a la comunicación**. De tal forma que **el levantamiento del secreto por uno de los participantes en la comunicación no se considera una violación a este derecho fundamenta**l. Lo anterior no resulta óbice para que, en su caso, se configure una violación al derecho a la intimidad dependiendo del contenido concreto de la conversación divulgada"
>
> Lo resaltado en negritas, es de esta Comisión.

126. Ya que éste no explicó si obtuvo el permiso de **ANR4** o en su defecto, la de **I1** para revelar el contenido de su supuesta conversación; pues recordemos que para que la comunicación entre dos personas pueda ser revelada de manera legal, necesariamente debe provenir de uno de los interlocutores, lo que en el caso no acontece. Sirva de apoyo, el siguiente criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente:

> **"COMUNICACIONES PRIVADAS. EL HECHO DE QUE UNO DE LOS PARTICIPANTES DÉ SU CONSENTIMIENTO PARA QUE UN TERCERO PUEDA *CONOCER SU CONTENIDO, NO IMPLICA UNA TRANSGRESIÓN AL DERECHO FUNDAMENTAL A SU INVIOLABILIDAD.***
> ***El objetivo principal de proteger las comunicaciones privadas es crear una barrera de protección frente a la intromisión de terceros ajenos a éstas****, por lo que basta que uno de los interlocutores levante el secreto de la comunicación para que no se vulnere el derecho fundamental de inviolabilidad de las comunicaciones privadas, en razón de que es innecesario el consentimiento de ambos o todos los comunicantes o participantes de la comunicación, ya que como partícipes son titulares autónomamente del referido derecho fundamental. Es por ello que el levantamiento del secreto de la comunicación privada por uno de los sujetos integrantes del proceso comunicante, implica que su contenido pueda emplearlo el tercero ajeno ante el cual se reveló dicha comunicación, no obstante que sea autoridad o particular y, consecuentemente, que pueda utilizarla como*

> *medio probatorio en juicio. En otras palabras, el consentimiento para difundir la comunicación o la liberación del obstáculo de privacidad, implica que el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas no pueda emplearse para proteger la información revelada.”*[26]
>
> Lo resaltado en negritas, es de esta Comisión.

127. Luego entonces, se tiene que, de los hechos narrados por **VD**, no se desprenden violaciones a sus derechos humanos, por parte de la servidora pública involucrada, en atención a que solo realizó señalamientos sobre de lo vulnerable que se sintió ante tal situación, en la cual consideró que se encontraba en peligro su integridad física, lo que tiene sustento en las diversas agresiones que incluso denunció ante las autoridades penales correspondientes. Sin embargo, tales situaciones no pueden adjudicársele a dicha ex servidora pública, pues son hechos de los que jamás tuvo conocimiento por parte del aquí quejoso; es decir, de su narrativa de los hechos motivo de queja, en contra de esta servidora pública, refirió lo amedrentado que se sintió ante tal situación y que se realizó un convenio en el que no estuvo de acuerdo, el cual, sin embargo, firmó porque su pretensión era retirarse del lugar ya que temía por su integridad.
128. Empero, ello no se lo dio a conocer en algún momento a **ANR4**, por el contrario, se quedó en el lugar hasta el final del convenio, en el que observando lo ahí plasmado, necesariamente se tuvo que hacer un relato de los hechos por ambas partes y así la Jueza estar en condiciones de elaborar las cláusulas que conformaron el convenio. En tal sentido, si firmó un convenio, el cual firmó al sentirse desprotegido por el actuar de la Jueza Comunitaria y que lo hizo en contra de su voluntad, tal situación no puede atribuírsele como responsabilidad a **ANR4**, por el solo hecho de que ésta no tuvo conocimiento en ningún momento de lo que el quejoso estaba sintiendo.

129. Por otro lado, lo que se tiene de lo actuado por **ANR4** en su calidad de Jueza Comunitaria de Fresnillo, Zacatecas, es una acción apegada a sus funciones, buscando en todo momento la amigable composición de las partes, mediante un proceso de conciliación, lo que logró a través de ese convenio en el que ambas partes se comprometieron a no agredirse mutuamente. Por lo que ese acto no puede ser reprochable, al no vulnerarse los derechos humanos del quejoso, específicamente su derecho de acceso a la justicia en sede administrativa, en relación con su derecho al debido proceso; sobre todo, en el entendido que tal situación solo puede ocurrir si las partes están de acuerdo con ello. Es decir, si muestran su voluntad para llevar a cabo ese proceso y en caso de no querer hacerlo, las partes pueden no aceptar el convenio, declarando su insumisión a la competencia de ese Juzgado y señalar que sean las autoridades competentes las que conozcan y resuelvan sobre esos hechos.

130. No obstante, el quejoso no lo hizo valer, y si bien para esta Comisión tiene justificación su actuar, al enfrentarse a un temor fundado por el antecedente de agresiones vividas, también es cierto que no puede atribuírsele a **ANR4**, otrora Jueza Comunitaria de Fresnillo, Zacatecas, que con su actuar de lograr un convenio entre las partes, vulnerara los derechos del aquí quejoso, sobre todo en consideración a que ésta no tuvo conocimiento en ningún momento sobre el sentir de **VD.** A lo cual se suma además el hecho de que dejó a salvo los derechos de las partes, para hacerlos valer ante la autoridad correspondiente en el momento que así lo desearan, dejando establecido que ese Juzgado es independiente de cualquier instancia legal, y que contaban con facultades para hacer el convenio de las partes y, finalmente, les señaló los medios de apremio previstos por la Ley de la materia en caso de incumplimiento. Convenio que debe subrayarse, solo pudo nacer de la voluntad de las partes y que, además, si se suscitó algún incumplimiento, el quejoso no señaló en su relatoría de hechos, haber acudido a con esa autoridad administrativa para que se hicieran valer las medidas de apremio advertidas.

131. Consecuentemente, este Organismo arriba a la conclusión de que, en el presente caso, la actuación de **ANR4**, en ese entonces Jueza Comunitaria de Fresnillo, Zacatecas, estuvo apegada a derecho, en uso de las facultades y atribuciones conferidas por la Constitución y por la materia de la cual conoció, por la Ley de Justicia Comunitaria del Estado de Zacatecas, garantizando el derecho de acceso a la justicia en sede administrativa, a **VD.** Por lo que, en ese sentido, lo procedente es dictar, como al efecto se hace **Acuerdo de No**

---

26 **Registro digital:** 2013199, **Instancia:** Primera Sala, **Décima Época, Materia(s):** Constitucional, Penal, **Tesis:** 1a. CCLXXX/2016 (10a.), **Fuente:** Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 37, Diciembre de 2016, Tomo I, página 363, **Tipo:** Aislada.
.

Responsabilidad en su favor; el cual, habrá de notificarse únicamente a sus superiores jerárquicos, en virtud de que, este Organismo tiene debidamente acreditado que **ANR4**, causó baja de la Administración Municipal de Fresnillo, Zacatecas.

IX. CONCLUSIONES DEL CASO.

1. Esta Comisión, rechaza la vulneración de los derechos humanos de todo gobernado. No obstante, en el caso específico, los elementos de prueba que se analizaron en la presente resolución son suficientes para acreditar que, no se violentó en perjuicio de **VD**, su derecho de acceso a la justicia, en relación con el derecho al debido proceso, por parte de **ANR2**, Agente del Ministerio Público, adscrita a la Unidad Especializada en Investigación Mixta del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas, pues su actuar, se vio ajustado al marco de sus competencias, resultando de autos que, los actos que el quejoso le atribuyó, son constitutivos de resoluciones análogas a las jurisdiccionales.

2. Del mismo modo, este Organismo resuelve que, el caudal probatorio, es suficiente para tener por cierto que la **ANR3**, Agente del Ministerio Público, adscrita a la Unidad Especializada en Investigación Mixta del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas; actuó en el marco de sus competencias, y los actos reclamados, se constituyen igualmente como análogos a los jurisdiccionales.
3. En el caso de **ANR1**, actualmente Directora del Centro de Justicia para Mujeres, esta Comisión acreditó que ésta solo tuvo intervención al inicio de la integración de la carpeta de investigación **(…)**, la cual, posteriormente se registró bajo el número (…), misma que fue judicializada por **ANR3**, resolviéndose mediante la firma de un acuerdo reparatorio, por lo que no existe reproche alguno que hacer a dicha servidora pública.

4. Igualmente, esta Institución, tiene por cierto que, en el caso, **ANR5**, Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Investigación Mixta del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas, no incurrió en actos que impliquen la vulneración de los derechos humanos del quejoso, en virtud a que, el 1º de agosto de 2020, dejó de tener a su cargo la carpeta de investigación **(…)**, por motivo de incapacidad médica.

5. De la misma manera, los elementos probatorios aportados al expediente, son suficientes para arribar a la conclusión de que, con su actuar, **ANR4**, otrora Jueza Comunitaria de Fresnillo, Zacatecas, no incurrió en actos que atentaran contra el derecho de acceso a la justicia en sede administrativa, en relación con el derecho al debido proceso, en agravio de **VD**, de **A**, de **M1** o **M2.**

6. En vista de lo anterior, y con fundamento en los artículos 51 y 52 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, en relación con el numeral 161, fracción VIII, de su Reglamento interno, se dicta **Acuerdo de no Responsabilidad**, en favor de **ANR2**, de **ANR3**, de **ANR1**, de **ANR5** y de **ANR4**.

7. Por lo anterior, hágase del conocimiento a la parte quejosa del derecho que le asiste de interponer el recurso de inconformidad previsto por el artículo 61 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, para que lo haga valer en caso de que así estime conveniente, ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, disponiendo para ello del término de treinta días naturales contados a partir de la notificación del presente documento.

8. Ahora bien, este Organismo Estatal hace especial énfasis en la obligación que tienen los servidores públicos de la ahora Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, en el marco del sistema de protección de derechos humanos que contempla la Constitución General de la República, de cumplir la ley, de prevenir la comisión de conductas que vulneren los derechos humanos, de proporcionar a las víctimas un trato digno, sensible y respetuoso, y fundamentalmente, brindar una debida atención a efecto de evitar revictimizarlas.

9. En el caso específico, este Organismo Estatal, tiene elementos suficientes para afirmar que **VD**, **A**, **M1** y **M2**, fueron víctima de una violación a su derecho de acceso a la justicia, en su modalidad de procuración, relacionado con el derecho al debido proceso, ocasionado por la negligencia y omisión en que incurrieron la **AR1**, otrora Agente del Ministerio Público,

adscrita a la Unidad Especializada en Investigación Mixta, del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas, y **AR2**, Agente del Ministerio Público, adscrita a la Unidad Especializada en Investigación Mixta número VII, del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas, con motivo de la integración de la carpeta de investigación **(…),** en la que el quejoso, su esposa e hijos, tienen reconocida la calidad de víctimas.

10. En consecuencia, esta Comisión enfatiza una vez más, la imperiosa necesidad de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, adopte una política institucional que tienda a superar la práctica de que el acceso a la justicia sólo le sea garantizada al imputado, debido a que también se constituye como una obligación para el Estado respecto a las víctimas de un delito y su familia, pues la investigación y persecución de los delitos que lleva a cabo el Ministerio Público es un elemento del derecho de acceso a la justicia. Por ello, esta investigación debe de llevarse a cabo de forma seria, eficaz y efectiva y no como mero trámite.

11. Lo anterior, debido a que, la protección de los derechos procesales es responsable de toda autoridad (administrativa, legislativa y judicial) que a través de sus resoluciones decide sobre derechos y obligaciones de las personas, por lo que las actuaciones del Ministerio Público deben apegarse a estos derechos. Por tanto, la implementación de tal política permitirá garantizar la no repetición de las violaciones a los derechos humanos de todo justiciable, en particular el derecho de acceso a la justicia, en la modalidad de procuración, y, como componente de aquél, del derecho a un recurso efectivo, salvaguardando con ello los derechos humanos de las personas.

12. Esta Comisión igualmente, logró acreditar que, con las omisiones en que incurrieron, tanto el **AR3**, ex Titular de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de Fresnillo, Zacatecas, como **AR4**, en ese entonces Director de dicho Departamento, violentaron en perjuicio del quejoso, su derecho de acceso a la justicia en sede administrativa, en relación con el derecho al debido proceso. Pues a pesar de contar con elementos suficientes para atender y resolver la denuncia popular promovida por **VD**, hasta la fecha no lo han hecho.

13. Por lo anterior, la Presidencia Municipal de Fresnillo, Zacatecas, deberá implementar las medidas y acciones pertinentes, a fin de que se solvente y dé trámite a la denuncia popular presentada por **VD, ordenando en consecuencia que, el personal designado para ello, realice cuanta diligencia** sea necesaria hasta dictar resolución correspondiente, notificando debidamente dicha resolución al quejoso.

X. REPARACIONES.

1. De conformidad con lo establecido, el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece en su párrafo tercero que: "*Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad".* En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley".

2. En un respeto irrestricto del Estado de Derecho, las personas gozaran de la garantía de que en caso de ser objeto de violación a sus derechos humanos, podrán reclamar que el o los responsable de dicha vulneración sean sancionados, pues el Estado tiene la posición de garante de sus derechos y por lo tanto; según lo ha dispuesto la Suprema Corte de Justicia de la Nación, *"Las víctimas de violación a los derechos humanos o sus familiares, tiene derecho a la reparación adecuada del daño sufrido, Lo cual debe concretarse a través de medidas individuales tendientes a restituir, indemnizar y rehabilitar a la víctima, así como de medias de satisfacción de alcance general y garantías de no repetición, mediante los procedimientos previstos legalmente para esos efectos, lo cual no es una concesión graciosa, si no el cumplimiento de una obligación jurídica. Lo anterior derivado tanto del régimen previsto constitucionalmente como de los instrumentos internacionales ratificados por México y de los criterios de organismos internacionales, los cuales se manifiestan claramente en el sentido de que es un derecho efectivo de las personas agraviadas a nivel*

fundamental obtener una reparación proporcional a la gravedad de las violaciones y al daño sufrido[27]."

3. El deber de reparación por violaciones a los derechos humanos, a nivel internacional, lo encontramos dispuesto tanto en el sistema universal como regional de protección a los derechos humanos. En el ámbito universal, se encuentra previsto en los "Principios y Directrices básicos sobre el derecho a las víctimas de violaciones manifiestas a las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves al derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones", adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 2005, donde se dispone que las violaciones de derechos humanos deben contemplar, de forma apropiada y proporcional a la gravedad de ésta, una reparación plena y efectiva en las formas siguientes: indemnización, restitución, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, lo cual a su vez es también contemplado por la Ley General de Víctimas, en sus artículo 1°, último párrafo, 7, fracciones I y II, y particularmente en el texto legal del artículo 26, que establece que *"Las Víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera oportuna, plena diferenciada, transformadora, integral y efectiva por el daño que han sufrido como consecuencia del delito o hecho victimizaste que las ha afectado o de las violaciones de derechos humanos que han sufrido, comprendiendo medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y medidas de no repetición*", además por lo previsto en el artículo 27 del mismo ordenamiento legal. Por ello resulta particularmente importante la ejecución de las medidas de reparación por parte del estado dirigidas a la no repetición en Zacatecas de hechos similares a los ocurridos en el presente caso.

4. En el sistema regional, la Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 63.1 dispone que cuando se acreditó que hubo violación a un derecho o libertad protegidos, se deberá garantizar al lesionado el goce de su derecho o libertad quebrantados, y, además, de ser procedente, se repararán las consecuencias de la medida o situación que se ha configurado la violación a estos derechos, aunado al pago de una justa indemnización a la parte lesionada.

5. Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha establecido que *las reparaciones, consisten en las medidas que tienden a hacer desaparecer los efectos de las violaciones cometidas. Su naturaleza y su monto dependen del daño ocasionado en los planos tanto material como inmaterial.*"[28]

6. Este doble alcance de la norma reparatoria, ha incidido cada vez con mayor frecuencia en el desarrollo de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dando lugar a una arquitectura preparatoria que tendrá como objetivo, no solo borrar las huellas que en la víctima produjo el actuar del Estado, sino también evitar que ese tipo de hechos se repitan.[29]

7. Por lo que hace a este derecho, el artículo 51 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, dispone que, al acreditarse una violación a los derechos humanos atribuible a un servidor público estatal, la resolución formulada al respecto debe incluir las medidas que procedan para lograr la efectiva resituación de las personas afectadas en sus derechos.

Modalidades de la reparación del daño. La reparación del daño comprende diversas modalidades en las que se puede materializar:

A) La restitución.

1. Los principios sobre derecho a obtener reparación, contemplan a la restitución, siempre que haya las condiciones para que ésta sea posible, la cual ha de devolver a la víctima la situación anterior a la vulneración a sus derechos humanos[30]. En el mismo sentido, el Tribunal Interamericano ha señalado reiteradamente en su jurisprudencia que la reparación

---

27 Tesis P/LXII/2010, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t XXXIII, enero de 2017. Pág. 28.

28 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Acevedo Jaramillo y otros Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 7 de febrero de 2006. Serie C. No. 144. Párr. 175.

29 Rousset Siri, Andrés Javier (2011): El Concepto de la Reparación Integral en la Jurisprudencia Interamericana de Derechos Humanos. Revista Internacional de Derechos Humanos / ISSN 2250-5210/2011. Año I- N1 59-www.revistaidh.org.

30 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs Paragauay. Sentencia 17 de junio de 2005. Serie C. No. 125. Párr. 189.

del daño causado requiere, en todos los casos posibles, la plena restitución; *restutio in integrum*, que significa el restablecimiento de la situación anterior a la violación.[31]

2. El concepto de restitución debe ser tomado en consideración por las autoridades responsables para que **VD** y **A**, así como sus menores hijos **M1** y **M2**, personas de quien se tiene por demostrada afectación concreta, en los términos expuestos en la presente Recomendación, sean restituidos en sus derechos transgredidos, en tanto que esto resulte factible y necesario a la fecha en que ésta se emita.

B) La indemnización.
1. La indemnización ha sido reconocida como una medida que tiende a compensar a las víctimas por afectaciones materiales sufridas con motivo de la falta que ha cometido el Estado en su perjuicio, entre ellos, el daño emergente, el lucro cesante y el daño moral sufrido por el agraviado[32]; lo que no puede implicar ni un empobrecimiento ni un enriquecimiento para la víctima o sus sucesores[33].

2. El concepto de indemnización, deberá ser tomado en consideración por las autoridades responsables para que **VD** y **A**, así como sus menores hijos **M1** y **M2,** personas de quien se tiene por demostrada afectación concreta, en los términos expuestos en el presente Instrumento Recomendatorio. Para determinar el monto, deberán tomarse en cuenta los hechos del caso y los daños acreditados, debiendo ser proporcional a la gravedad de la violación y a las circunstancias, así como acorde a la evaluación económica de los perjuicios evaluables, como consecuencia de las violaciones acreditadas.

C) De la Satisfacción.
1. Respecto a este concepto, de conformidad con lo establecido por los Principios sobre el derecho a obtener reparaciones, ésta debe incluir, cuando sea el caso, la totalidad o parte de las medidas siguientes: a) medidas eficaces para conseguir que no se continúe con las violaciones; b) la verificación de los hechos y la revelación pública y completa de la verdad; c) una declaración oficial o decisión oficial que restablezca la dignidad, la reputación y los derechos de la víctima; d) una disculpa pública; y e) la aplicación de sanciones judiciales o administrativas a los responsables de las violaciones[34].

2. Este Organismo considera que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, a quien va dirigida la presente Recomendación, por conducto de su Órgano de Control Interno correspondiente, deberá iniciar el procedimiento administrativo en contra de la **AR1**, otrora Agente del Ministerio Público, adscrita a la Unidad Especializada en Investigación Mixta, del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas, y **AR2**, Agente del Ministerio Público, adscrita a la Unidad Especializada en Investigación Mixta número VII, del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas, por ser las servidores públicas que vulneraron el derecho de acceso a la justicia, en la modalidad de procuración, en relación con el derecho al debido proceso, en perjuicio de **VD**, de **A**, así como de sus menores hijos **M1** y **M2.**

3. Esta Comisión determina que la Presidencia Municipal de Fresnillo, Zacatecas, a quien va dirigida la presente Recomendación, por conducto de su Contraloría Interna u Órgano de Control Interno correspondiente, deberá iniciar procedimiento administrativo en contra del **AR3** y **AR4**, ex Directores del Departamento de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de dicho Municipio, por ser los servidores públicos que quebrantaron el derecho de acceso a la justicia en sede administrativa, en relación con el derecho al debido proceso, en agravio de **VD**, de **A**, así como de sus menores hijos **M1** y **M2.**

D) Garantía de no repetición.
1. Este Organismo estima que la capacitación a los servidores públicos debe materializarse en programas y cursos permanentes de capacitación en temas de derechos humanos, para efectos de garantizar la no repetición de actos infractores a derechos humanos por parte de los agentes involucrados.

---

31 Ídem, párr. 182.

32 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Velásquez Rodríguez Vs Honduras, Reparaciones y Costas, Sentencia 21 de junio de 1989, Serie C, No. 7, párr.38.

33 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Tinoco Estrada y otros Vs Bolivia, Fondo, Reparación y Costas. Sentencia 27 de noviembre de 2008, Serie C. No. 211.

34 ONU, Principios y Directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas a las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves al Derecho Internacional Humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, A/RES/60/147, 21 de marzo de 2006, párr. 22.

2. En el caso de los servidores públicos adscritos a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, resulta indispensable la capacitación en materia del derecho de acceso a la justicia, específicamente, en su vertiente de justicia pronta y expedita, dirigida a los Agentes del Ministerio Público, con el afán de que ciñan su actuar a los parámetros establecidos en esta Recomendación.

3. Asimismo, la Presidencia Municipal de Fresnillo, Zacatecas, deberá implementar una serie de capacitaciones dirigidas al personal de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, encaminado al entendimiento del derecho de acceso a la justicia, específicamente, en lo que hace a la sede administrativa, y la íntima relación que dicho derecho tiene con el derecho al debido proceso, a fin de que ejerzan su función dentro del marco de legalidad y pleno respeto a los derechos humanos establecido en este Instrumento Recomendatorio.

XI. RECOMENDACIONES.

Por lo anterior, y con fundamento en los 1 y 102 apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 2, 3, 4, 8, 17, 37, 51, 53, 54, 56, 57 y 58 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas se emiten las siguientes Recomendaciones:

PRIMERA. Dentro de un plazo máximo de un mes, contado a partir de la notificación de la presente recomendación, se inscriba en el Registro Estatal de Víctimas, a **VD**, a **A**, así como a sus menores hijos **M1** y **M2**, en su calidad de víctimas directas de violaciones a sus derechos humanos, a fin de garantizar que tengan acceso oportuno y efectivo a las medidas de ayuda, asistencia, atención y reparación integral previstas en la Ley de Atención a Víctimas del Estado de Zacatecas.

SEGUNDA. Dentro de un plazo máximo de 30 días, contados a partir de la aceptación de la presente Recomendación, se inicie el proceso de investigación administrativo correspondiente a **AR1**, otrora Agente del Ministerio Público, adscrita a la Unidad Especializada en Investigación Mixta, del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas, y a **AR2**, Agente del Ministerio Público, adscrita a la Unidad Especializada en Investigación Mixta número VII, del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas, servidoras públicas implicadas, con el fin de determinar su responsabilidad administrativa, y en su momento procesal oportuno, se remitan las constancias a esta Comisión de Derechos Humanos, que acrediten su cumplimiento.

TERCERA. Dentro de un plazo máximo de 30 días, contados a partir de la aceptación de la presente Recomendación, se inicie el procedimiento de investigación administrativo correspondiente a **AR4** y **AR3** ex Directores del Departamento de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de dicho Municipio, servidores públicos implicados, con el fin de determinar su responsabilidad administrativa, y en su momento procesal oportuno, se remitan las constancias a esta Comisión de Derechos Humanos, que acrediten su cumplimiento.

CUARTA. Dentro del plazo máximo de 30 días, contados a partir de la aceptación de la presente Recomendación, la Presidencia Municipal de Fresnillo, Zacatecas, deberá implementar las medidas y acciones pertinentes, a fin de que se solvente y dé trámite a la denuncia popular presentada por **VD**, ordenando en consecuencia que, el personal designado para ello, realice cuanta diligencia sea necesaria hasta dictar resolución correspondiente, notificando debidamente dicha resolución al quejoso.

QUINTA. Dentro del plazo máximo de 3 meses, contados a partir de la aceptación de la presente Recomendación, se capacite al personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado, en temas relativos a la protección y respeto a los derechos humanos, especialmente en materia del derecho de acceso a la justicia, en su vertiente de justicia pronta y expedita, dirigida a los Agentes del Ministerio Público, con el afán de que ciñan su actuar a los parámetros establecidos en esta Recomendación y en su momento procesal oportuno, se remitan las constancias a esta Comisión de Derechos Humanos, que acrediten su cumplimiento.

SEXTA. Dentro del plazo de máximo de 3 meses, contados a partir de la aceptación de la presente Recomendación, se capacite al personal de la Dirección de Desarrollo Urbano y

Obras Públicas de Fresnillo, Zacatecas, en temas relativos a la protección de los derechos humanos, especialmente, del derecho de acceso a la justicia en sede administrativa, en relación con el derecho al debido proceso; con énfasis especial en las obligaciones y atribuciones conferidas por el Código Municipal Reglamentario de Fresnillo, Zacatecas, el Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Fresnillo, Zacatecas, el Código Urbano del Estado de Zacatecas y demás legislación aplicable a las actividades propias de dicha Dirección; para que, en lo sucesivo, se conduzcan en su actuar laboral con apego y respeto a la legalidad, y en su momento procesal oportuno, se remitan las constancias a esta Comisión de Derechos Humanos, que acrediten su cumplimiento.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 53, párrafo segundo de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, se hace del conocimiento de la autoridad a la que va dirigida esta Recomendación, que dispone de un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente en que ésta se le notifique, para que manifieste si la acepta o no, en el entendido de que de no aceptarla, su respuesta se hará del conocimiento de la opinión pública. En caso de que la acepte, se le notifica que dispone de un plazo de 15 días, contados a partir del vencimiento del término del que disponía para responder sobre la aceptación, a fin de enviar las pruebas de su cumplimiento.

Por último, hágasele saber a la quejosa que, de conformidad con el artículo 61 de la Ley de este Organismo, dispone de 30 días naturales, computados a partir de la fecha de notificación del presente documento, para que en caso de que exista inconformidad con la misma, interponga el recurso de impugnación correspondiente ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Así lo determina y firma

DRA. EN D. MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOS
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO

Expedientes: CDHEZ/370/2019 y CDHEZ/445/2019.

Persona quejosa: **VD**.

Persona agraviada: VD.

Autoridades Responsables:
I. Director General de Prevención y Reinserción Social del Estado.
II. Director y Personal de Seguridad y Custodia del Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas.
II. Defensora Pública del Estado de Zacatecas

Autoridad presunta responsable:
I. Juez de Ejecución de Sanciones Penales del Estado

Derechos humanos vulnerados:
I. Derecho de las personas privadas de su libertad, en relación al derecho al trato digno y a la reinserción social.
II. Derecho de las personas privadas de la libertad a que se proteja su integridad personal.
III. Derecho a la legalidad y seguridad jurídica.
IV. Derecho a la vida, en relación con el deber del Estado garante de las personas privadas de su libertad.

Derecho humano analizado:
I. Derecho a la legalidad y seguridad jurídica.

Zacatecas, Zacatecas a 08 de diciembre de 2021, una vez concluida la investigación de los hechos que motivaron el expediente de queja **CDHEZ/370/2019**, así como el expediente **CDHEZ/445/2019,** el cual fuera acumulado a la presente y, analizado el proyecto presentado por la Sexta Visitaduría, la suscrita aprobó, de conformidad con los artículos 4, 8 fracción VII, inciso A), 17 fracción V, 37, 49, 50, 51 y 52 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, en relación con lo dispuesto por los numerales 161, fracciones III, X y XI, 162, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 y 175 de su Reglamento Interno, lo siguiente:

Recomendación 53/2021, que se dirige a las siguientes autoridades:

- **GENERAL ADOLFO MARÍN MARÍN,** Secretario de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas, respecto de los actos atribuidos al entonces Director General de Prevención y Reinserción Social del Estado, **AR1SSP**, y al entonces Director del Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas, Teniente Coronel **AR2SSP,** por la vulneración de los siguientes derechos:
    - Derecho de las personas privadas de su libertad, en relación al derecho al trato digno y a la reinserción social.
    - Derecho de las personas privadas de la libertad a que se proteja su integridad personal.
    - Derecho a la legalidad y seguridad jurídica.
    - Derecho a la vida, en relación con el deber del Estado garante de las personas privadas de su libertad.

- **MAESTRO JOSÉ PABLO MERCADO SOLÍS,** Director General de la Defensoría Pública del Estado de Zacatecas, respecto a las omisiones en que incurrió la **AR3DGDP,** Defensora Pública, por lo que hace a los siguientes derechos:
    - Derecho de las personas privadas de su libertad, en relación con la reinserción social.
    - Derecho de las personas privadas de la libertad a que se proteja su integridad personal.
    - Derecho a la legalidad y seguridad jurídica.

Acuerdo de No Responsabilidad, que se dirige al **SP1,** Juez de Ejecución de Sanciones del Estado de Zacatecas.

R E S U L T A N D O S:

I. DE LA CONFIDENCIALIDAD.

1. De conformidad con los artículos 6º apartado A, fracción II y 16, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 23 y 85 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, los datos personales relacionados con esta resolución permanecerán confidenciales, ya que sus datos personales, así como aquellos relativos a su vida privada y familia, no tienen el carácter de públicos.

II. RELATORÍA DE LOS HECHOS Y OBJETO DE LA CONTROVERSIA.

1. El 13 de agosto de 2019, personal adscrito a esta Comisión, a petición de la señora **VI1,** madre de **VD**, acudió al Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas, a recabar comparecencia, a través de la cual, éste presentó formal queja en contra del **SP1**, Juez de Ejecución y Sanciones Penales del Tribunal Superior de Justicia del Estado; del Director del Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas; y de la **AR3DGDP**, Defensora adscrita a la Defensoría Pública del Estado, de conformidad con los artículos 30, 31 y 32 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas.

El 15 de agosto de 2019, se remitió la queja a la Sexta Visitaduría, bajo el número de expediente citado al rubro, a efecto de formular acuerdo de calificación de ésta, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 123 y 124, fracción I, del Reglamento de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas.

El 19 de agosto de 2019, se determinó calificar los hechos como pendientes, de conformidad con lo establecido por el artículo 124, fracción III, del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, en virtud de hacerse necesario precisar la queja.

El 21 de agosto de 2019, personal adscrito a este Organismo, se constituyó en el Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas, a efecto de recabar comparecencia de **VD**. Por lo cual, el 22 de agosto siguiente, la queja se calificó como presunta violación al derecho de las personas privadas de su libertad a que se proteja su integridad personal, en relación con el derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica; así como al derecho al trato digno y a la reinserción social de las personas privadas de la libertad; de conformidad con lo dispuesto por los artículos 123 y 124, fracción I, del Reglamento de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas.

Posteriormente, en fecha 17 de septiembre de 2019, se dio inicio a queja de manera oficiosa a favor de **VD** dentro del expediente **CDHEZ/445/2019**, en la que se emitió acuerdo de admisión, de conformidad con los artículos 30, 31 y 32 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, y en la que se señaló, como autoridad responsable, al Director y

personal de Guardia y Custodia del Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas, por actos presuntamente violatorios de sus derechos humanos.

Por razón de turno, el 18 de septiembre de 2019, se radicó la queja en la Cuarta Visitaduría General, bajo el número de expediente **CDHEZ/445/2019**, a efecto de formular el acuerdo de calificación correspondiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 123 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas.

El 19 de septiembre de 2019, la queja oficiosa se calificó como presunta violación al derecho a la vida, en relación con el deber del estado garante de las personas privadas de su libertad, de conformidad con lo establecido en el artículo 124, fracción I, del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas.

El 08 de octubre de 2020, se determinó la acumulación del expediente **CDHEZ/445/2019**, al marcado con el número **CDHEZ/370/2019**, en virtud a que se estimó estrictamente necesario para no dividir la investigación, de conformidad con lo estipulado por el artículo 117, fracción III, del Reglamento Interno de esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas.

2. Los hechos materia de la queja dentro de los diferentes expedientes, consistieron en lo siguiente:

Expediente CDHEZ/370/2019.
El 08 de agosto de 2019, **VI1** compareció ante el personal adscrito a esta Comisión a solicitar asesoría, en virtud de que su hijo **VD,** quien se encontraba privado de la libertad en el Centro Regional de Reinserción Social Varonil, Cieneguillas, Zacatecas, había sido golpeado físicamente por personas privadas de la libertad en el área del OCLADE. Por lo que solicitó al Director de dicho Centro, su traslado a otro establecimiento, pues temía por la vida y la integridad física de su hijo.

El 13 de agosto de 2019, **VD** señaló que había sido lesionado y torturado por otras personas privadas de la libertad. Razón por la cual, fue trasladado al área del OCLADE del CERERESO Varonil de Cieneguillas, Zacatecas; lugar donde ocupaba la celda número 9, de la parte superior, donde también fue agredido y amenazado de muerte por las personas privadas de la libertad, con quienes compartía su celda, a quienes identificó por los apodos de (…). Refirió que, posteriormente, fue ubicado en una celda de la parte inferior del OCLADE, un cuarto de 3 x 4 metros, sin ventilación, sin sanitario ni regadera, lugar que era habitado por 8 personas en total. Afirmó que, en ese lugar, permanecían las 24 horas del día. Por esas razones, había solicitado al Director del Centro, en dos ocasiones, su traslado a otro penal, fuera del estado. Petición que también le formuló al Juez de Ejecución y Sanciones Penales en 5 escritos, de los cuales afirmó, no había recibido respuesta. Insistió en solicitar su traslado a la brevedad posible, con la finalidad de salvaguardar su vida, pues afirmaba, que ésta corría peligro.

En comparecencia recabada el 21 de agosto de 2019, **VD** precisó que los escritos que le remitió al Juez de Ejecución y Sanciones Penales, fueron en el mes de abril, junio, julio y el último, en agosto de 2019, sin recordar las fechas del resto de las solicitudes, pero que de ninguno había tenido respuesta; asimismo, enderezó su queja en contra de la **AR3DGDP**, Defensora Pública, adscrita al Instituto de la Defensoría Pública del estado, quien tenía conocimiento de las condiciones en las que se encontraba al interior del Centro, por lo que pedía su traslado en virtud de que su vida corría peligro, y no hacía nada, además de que habían transcurrido 7 meses sin que nadie le diera respuesta.

Respecto al entonces Director del Centro Regional de Reinserción Social Varonil, Cieneguillas, Zacateas, su queja la enderezó porque lo tenía en la celda 01, planta baja, del OCLADE, en el que vivían 8 personas más, sin baño, sin regadera, por lo que tenían que orinar en botellas, y se encontraban en hacinamiento. Por lo que solicitó, en lo que se resolvía lo de su traslado de Centro Penitenciario, fuera cambiado de celda, pues temía por su seguridad, pues había sido golpeado en ese lugar.

Expediente CDHEZ/445/2019.
Se dio inicio a queja oficiosa, derivada del parte informativo suscrito por el Teniente Coronel **AR2SSP**, otrora Director del Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas, a través del cual, informó de la pérdida de la vida de **VD**, en la celda 2, bloque B, planta baja, del referido centro penitenciario, siendo encontrado en su interior, por parte de la Enfermera **SP2**.

3. El 29 de agosto de 2019, se recibieron los informes de las siguientes autoridades:
   a) **AR3DGDP**, Defensora Pública adscrita al Juzgado de Ejecución de Sanciones de la Capital.
   b) **SP1**, Juez de Ejecución de Sanciones Penales del Estado.
   c) Teniente Coronel **AR2SSP**, entonces Director del Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas.

3.1. Dentro de la queja oficiosa, el Teniente Coronel, **AR2SSP,** entonces Director del Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas, en su calidad de autoridad involucrada, rindió el informe correspondiente el 07 de octubre de 2019.

III. COMPETENCIA.

1. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas es competente, en términos de los artículos 1º, 4º, 6º, 8º fracción VII, inciso A) y 31 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, en relación con los numerales 15, 22 y 23 de su Reglamento Interno, debido a que la queja se promueve en contra de servidores públicos adscritos a la Administración Pública del Estado de Zacatecas.

2. De conformidad con los artículos 123 y 124 del Reglamento Interior de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, este Organismo advirtió que de los hechos se presumía la violación de los derechos humanos de **VD**, quien, en vida, se encontraba privado de su libertad en el Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas.

3. Esta Comisión presumió la violación de los siguientes derechos:
   a) Derecho de las personas privadas de la libertad a que se proteja su integridad personal.
   b) Derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica.
   c) Derechos al trato digno y a la reinserción social de las personas privadas de la libertad.
   d) Derecho a la vida, en relación con el deber del Estado garante de las personas privadas de su libertad.

IV. PROCEDIMIENTO ANTE LA COMISIÓN.

Con la finalidad de documentar las presuntas violaciones a derechos humanos, así como para determinar la existencia o no de responsabilidad por parte de los servidores públicos señalados, este Organismo realizó entrevistas a las personas relacionadas con los hechos; se recabaron comparecencias de personal adscrito al Centro Regional de Reinserción Social Varonil, de Cieneguillas, Zacatecas, se solicitaron informes a las autoridades señaladas como responsables, así como informes en vía de colaboración y complementarios, se consultaron diligencias practicadas dentro de la carpeta de investigación relacionada con los hechos, así como la documentación necesaria para emitir la presente Recomendación.

V. PRUEBAS.

Con base en lo estipulado en los artículos 48 y 49 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, en relación con los numerales 150, 151, 152, 153 y 154 del Reglamento Interior de este Organismo, durante el procedimiento realizado por esta Institución

se recabaron los elementos probatorios documentales, remitidos tanto por el agraviado como por las autoridades señaladas como responsables, así como las declaraciones necesarias para emitir la resolución correspondiente.

VI. SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS VULNERADOS.

A) DERECHO DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD, EN RELACIÓN AL DERECHO AL TRATO DIGNO Y A LA REINSERCIÓN SOCIAL.

1. El derecho al trato digno está reconocido en los artículos 1°, 18 y 25 de la Constitución Federal, y en el ámbito internacional en los artículos 1° de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 11.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y V, de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que disponen que toda persona tiene derecho al respeto de su honra, su reputación, al reconocimiento de su dignidad, a la protección de la Ley contra los ataques abusivos a éstas, así como a no ser sometido a tratos degradantes.[1]

2. Se ha definido a la dignidad como "el interés inherente a toda persona, por el mero hecho de serlo, a ser tratada como tal y no como un objeto, a no ser humillada, degradada, envilecida o cosificada".[2] En ese sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CrIDH) sobre las personas privadas de libertad reconoce que: … "El Estado se encuentra en una posición especial de garante, […] las autoridades penitenciarias ejercen un fuerte control o dominio sobre las personas que se encuentran a su custodia. […] Se produce una relación e interacción especial de sujeción entre la persona privada de libertad y el Estado, caracterizada por la particular intensidad con que el Estado puede regular derechos y obligaciones y por las circunstancias propias del encierro, en donde al recluso se le impide satisfacer por cuenta propia una serie de necesidades básicas que son esenciales para el desarrollo de una vida digna".[3]

3. La CrIDH ha puntualizado que: "El Estado debe asumir una serie de responsabilidades particulares y tomar diversas iniciativas especiales para garantizar a los reclusos las condiciones necesarias para desarrollar una vida digna y contribuir al goce efectivo de aquellos derechos que bajo ninguna circunstancia pueden restringirse o de aquéllos cuya restricción no deriva necesariamente de la privación de libertad y que, por tanto, no es permisible. De no ser así, ello implicaría que la privación de libertad despoja a la persona de su titularidad respecto de todos los derechos humanos, lo que no es posible aceptar".[4]

4. Las condiciones para favorecer una reinserción social efectiva implican categóricamente el respeto a la dignidad de las personas privadas de la libertad, que favorezca un proceso de comunicación e interacción entre éstos y la sociedad al momento de recobrar su libertad.

5. Un sistema penitenciario estable debe integrar la seguridad, el control y la justicia, como parte de la obligación de las autoridades penitenciarias para evitar que el orden se colapse, procurando un trato equitativo y respetuoso de los derechos humanos, tendente a lograr la reinserción social efectiva.

6. La búsqueda permanente del equilibrio de estos factores redunda en la gobernabilidad dentro de la institución penitenciaria, de tal forma que las medidas que se adopten deben fortalecer que las autoridades encargadas de la conducción de la vida cotidiana en la prisión cumplan con

---

[1] CNDH. Recomendaciones 68/2016 de 28 de diciembre de 2016, p. 56 y 42/2015 de 30 de noviembre de 2015, p. 379.
[2] Jurisprudencia constitucional. "DIGNIDAD HUMANA CONSTITUYE UNA NORMA JURÍDICA QUE CONSAGRA UN DERECHO FUNDAMENTAL A FAVOR DE LAS PERSONAS Y NO UNA SIMPLE DECLARACIÓN ÉTICA". Semanario Judicial de la Federación, agosto de 2016. Registro: 2012363.
[3] Caso "Instituto de Reeducación del Menor vs. Paraguay". Sentencia del 2 de septiembre de 2004. Párr. 152
[4] Ibídem. Párr. 153.

su responsabilidad, con estricto apego previsto en la Constitución e Instrumentos Nacionales e Internacionales en la materia.

7. En los Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) emitidos anualmente por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se ha registrado la importancia de dar atención entre otros a los siguientes rubros o indicadores: "aspectos que garantizan la integridad personal de la persona privada de la libertad"; "aspectos que garantizan una estancia digna"; "Condiciones de Gobernabilidad"; así como "reinserción social de la persona privada de la libertad", en los que si bien es cierto, en el emitido en 2019[5], en el Centro Regional de Reinserción Social Varonil, Cieneguillas, Zacatecas, de manera general, se observó una apropiada atención en los siguientes temas:

"…RUBRO I ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD PERSONAL DEL INTERNO:
- ✓ Número de persona privada de la libertads en relación a la capacidad del centro.
- ✓ Prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de detección.

RUBRO II ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA:
- ✓ Condiciones materiales e higiene de los talleres y/o áreas deportivas.

RUBRO III CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD:
- ✓ Normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, lineamientos y disposiciones aplicables; su difusión y actualización).
- ✓ Capacitación del personal penitenciario.

RUBRO IV REINSERCIÓN SOCIAL DEL INTERNO:
- ✓ Clasificación de las personas privadas de la libertad…"

8. Con los parámetros anteriores, no se aprecia prevalencia de condiciones de sobrepoblación y hacinamiento, pero se detectó un nivel alto de riesgo en los temas que resultaba importante prestar atención, como:

"…RUBRO I ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD PERSONAL DEL INTERNO:
- ✓ Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular.
- ✓ Insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos.
- ✓ Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los D. H.

RUBRO II ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA:
- ✓ Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las personas privadas de la libertad.
- ✓ Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene del área médica.
- ✓ Deficiencias en la alimentación.

RUBRO III CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD:
- ✓ Insuficiencia de personal de seguridad y custodia.
- ✓ Deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones disciplinarias.
- ✓ Ejercicio de funciones de autoridad por personas privadas de la libertad.
- ✓ Condiciones de autogobierno/cogobierno.
- ✓ Presencia de actividades ilícitas.
- ✓ Presencia de cobros (extorsión y sobornos).

RUBRO IV REINSERCIÓN SOCIAL DEL INTERNO:
- ✓ Deficiente separación entre procesados y sentenciados.
- ✓ Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación.
- ✓ Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas.
- ✓ Inadecuada organización y registros para el cumplimiento del plan actividades…"

9. En la supervisión penitenciaria, realizada por el personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, acompañados de personal de este Organismo local, concretamente la que se llevó a cabo en el Centro Regional de Reinserción Social de Cieneguillas, el 24 de abril de

[5]Comisión Nacional de los Derechos Humanos, realizó visitas a los Centros Penitenciarios de la entidad, del 23 al 25 de abril de 2019.

2019[6] (a escasos días del primer acontecimiento denunciado por el aquí quejoso, que fue el 08 de mayo de esa anualidad), en dicho Centro se alojaba a un total de 910 personas, de las 1,284 que tiene como capacidad máxima de personas privadas de la libertad, por lo que, numéricamente y de forma general, no superaba la capacidad instalada del centro, lo que lleva a concluir que no se observaba hacinamiento, ya que se encontraba al 70.87% de su capacidad.

10. Previo a continuar con el desarrollo del tema, se hace necesario remitirnos a uno de los temas de la queja presentada por **VD**, pues en las comparecencias recabadas por personal adscrito a este Organismo, especificó que presentaba queja en contra del Director del Centro Regional de Reinserción Social de Cieneguillas, Zacatecas, en virtud de las condiciones de vida en las que se encontraba, pues afirmó que para el 21 de agosto de 2019, estaba ubicado en la celda 01 planta baja del OCLADE, la cual mide 3x4 metros, y que ésta era habitada por 8 personas, entre ellos el quejoso; que no cuenta con sanitario, regadera, ni ventilación, por lo cual se ven obligados a orinar en botellas; que en ese lugar permanecen encerrados las 24 horas del día y se encontraban muy "amontonados".

11. La carencia de espacios incide de manera negativa en la gobernabilidad, menoscaba el desarrollo de las actividades que se realizan en el interior y genera también un ambiente propicio para los actos de violencia, como aconteció en reiteradas ocasiones con **VD**[7]. Así, la sobrepoblación penitenciaria ha traído como consecuencia el surgimiento de otros problemas, que de manera manifiesta afectan al sistema penitenciario, como: el déficit de espacios humanamente habitables; hacinamiento como resultado de una ausencia o inadecuada clasificación de la población; falta de control e ingobernabilidad, por la inequidad debido a la mayor cantidad de personas privadas de la liberad ante el menor número de empleados de las instituciones penitenciarias; insuficiencia de servicios básicos de alojamiento en condiciones de vida digna en prisión; falta de oportunidades reales de acceso a los medios para lograr la reinserción social efectiva[8].

12. La sobrepoblación genera a su vez, serias dificultades en cuanto al desempeño del personal destinado a la atención de las personas privadas de la libertad, tanto técnico como administrativo, pero sobre todo de seguridad y custodia, quien a menudo se ve rebasado, con mucho, por el número de personas a atender, ocasionando, incapacidad para enfrentar brotes de violencia, pues aquéllos no son suficientes para enfrentar una situación de conflicto, problemática que la Comisión Nacional destacó en el Pronunciamiento "La Sobrepoblación en los Centros Penitenciarios de la República Mexicana."[9]

13. La CrIDH ha sostenido que los dormitorios de gran capacidad implican "una falta de privacidad para los presos en su vida diaria. Además, el riesgo de intimidación entre persona privada de la libertad puede ser alto, ya que tales condiciones de alojamiento son propensas a fomentar el desarrollo de subculturas delictivas y facilitar el mantenimiento de la cohesión de organizaciones criminales, aunado a que pueden volver extremadamente difícil, el apropiado control por parte del personal penitenciario. De igual forma, con tales alojamientos, la apropiada distribución individual de presos, basada en una evaluación caso por caso de riesgos y necesidades, también llega a ser una situación práctica casi imposible".[10]

14. Si bien es cierto que las personas recluidas sufren limitaciones necesarias por el hecho de la privación de libertad, también lo es que independientemente de su situación jurídica o del momento procesal en que se encuentren, deben ser tratadas con el respeto inherente a la dignidad de ser humano. Por ello, el Estado en su condición de garante, es responsable de que

---

[6]Cuarto Informe de Actividades de la Doctora en Derecho Ma. De la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, página 397, *in fine*.
[7]CNDH Recomendación General no. 30/2017 Sobre Condiciones de Autogobierno y/o Cogobierno en los Centros Penitenciarios de la República Mexicana. Publicada el 8 de mayo de 2017. Párrafo 21.
[8]CNDH "LA SOBREPOBLACIÓN EN LOS CENTROS PENITENCIARIOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA", ANÁLISIS Y PRONUNCIAMIENTO, Introducción, p 5
[9] Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 2015
[10] Caso "Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) vs. Venezuela", Sentencia del 5 de julio de 2006, Párr. 92

las condiciones de estancia sean las apropiadas y que se haga efectivo, por parte del personal penitenciario, el respeto de los derechos humanos de los persona privada de la libertad, y de manera específica, el derecho a la vida, al trato digno, a la seguridad y a la integridad personal de aquellos individuos que se encuentren bajo su custodia, tal como se prevé en el artículo 5.2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

15. El numeral 1 de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos "Reglas Mandela" establece puntualmente que: "Todos los reclusos serán tratados con el respeto que merecen su dignidad y valor intrínsecos en cuanto seres humanos. Ningún recluso será sometido a tortura ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, contra los cuales se habrá de proteger a todos los reclusos, y no podrá invocarse ninguna circunstancia como justificación en contrario. Se velará en todo momento por la seguridad de los reclusos, el personal, los proveedores de servicios y los visitantes..."

16. Por su parte, en la Recomendación General 18, sobre la situación de los Derechos Humanos de las personas privadas de la libertad en los Centros Penitenciarios de la República Mexicana, la Comisión Nacional observó que la sobrepoblación genera serias dificultades para las personas privadas de libertad e incluso pueden ocasionar situaciones que constituyan un trato cruel, inhumano o degradante, y también otros abusos, cuya prohibición se prevé en la última parte del artículo 19, de la Constitución Federal, que establece que "todo mal tratamiento en la aprehensión o en las prisiones, toda molestia que se infiera sin motivo legal, toda gabela o contribución en las cárceles, son abusos que serán corregidos por las leyes y reprimidos por las autoridades", así como prohibidos por el artículo 16.1, de la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

17. De igual manera, en los Principios y Buenas Prácticas Sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, de la Organización de Estados Americanos, se señala en el Principio XVII, párrafo segundo, que "la ocupación de establecimiento por encima del número de plazas establecido será prohibida por la ley. Cuando de ello se siga la vulneración de derechos humanos, ésta deberá ser considerada una pena o trato cruel, inhumano o degradante", situación que se actualiza en el caso que se analiza.

18. Las penas privativas de libertad tendentes a la reinserción social efectiva con pleno respeto de los derechos humanos presuponen la existencia de medidas para evitar la sobrepoblación y el hacinamiento como lo prevén los artículos 5, inciso 6, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 10, inciso 3, del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.

19. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a partir del caso Neira Alegría y otros *Vs.* Perú[11], ha sostenido que en términos de lo dispuesto por el "artículo 5.2, de la Convención Americana sobre Derechos humanos, toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal y el Estado debe garantizar el derecho a la integridad personal".

20. Este deber del Estado de proporcionar la seguridad necesaria, de garantizar, respetar y hacer respetar los derechos de las personas privadas de su libertad, debe tener un especial énfasis, principalmente dada la disminución de la capacidad de autoprotección de las personas en reclusión, pues al ingresar en un centro de detención, como lo ha sostenido la Comisión Interamericana, "diversos aspectos de su vida se someten a una regulación fija, y se produce un alejamiento de su entorno natural y social, un control absoluto, una pérdida de intimidad, una limitación del espacio vital y, sobre todo, una radical disminución de las posibilidades de autoprotección. Todo ello hace que el acto de reclusión implique un compromiso específico y material del Estado proteger la dignidad humana del recluso mientras esté bajo su custodia, lo que incluye su protección frente a las posibles circunstancias que puedan poner en peligro su vida, salud e integridad personal, entre otros derechos."[12]

---

[11] Corte I.D.H., Caso Neira Alegría y otros Vs. Perú. Sentencia de 19 de enero de 1995. Serie C No. 20. Párr. 60.
[12] Corte Interamericana de Derechos Humanos, Informe No. 41/99, Caso 11.491, Fondo, Menores Detenidos, Honduras, 10 de marzo de 1999. Párr. 135.

21. La concurrencia de diversos factores puede ser causa generadora de la violencia, ya sea entre los mismos internos o la autoridad en contra de éstos, lo que dificulta el cumplimiento de las obligaciones que tiene el Estado, y provoca la violación a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad por parte de quienes están a cargo de su custodia o la comisión de conductas delictivas en agravio de los propios reclusos, lo cual puede ser atribuible a la ausencia de control por parte de la autoridad, a un inadecuado ejercicio de las funciones de quienes tienen a su cargo y laboran en los centros de reclusión, así como por la deficiencia en el servicio por falta de capacitación, de recursos humanos y materiales, el hacinamiento, el autogobierno, la ausencia de clasificación criminológica, la falta de personal capacitado, entre otros.

22. En ese contexto, la Dirección General de Prevención y Reinserción Social del Estado, perteneciente a la Secretaría de Seguridad Pública, como responsable de los centros locales de reinserción social, tiene la obligación de preservar sus instituciones y por ende el de las personas ahí internas, por lo que, en relación a las celdas en el Centro Regional de Reinserción Social de Cieneguillas, Zacatecas, concretamente las habilitadas como tal en el área denominada OCLADE (Área de Observación, Clasificación y Desintoxicación), en la planta baja, son habitaciones tipo oficina, que no cumplen los estándares internacionales que un espacio físico debe tener para una estancia digna y con apego al respeto de los derechos humanos de los reclusos.

23. Es de señalarse lo anterior, en virtud de que, inicialmente, el aquí quejoso **VD**, advirtió que, luego de haber sido agredido físicamente en la celda 09 de la planta alta del OCLADE, fue reubicado en la celda número 01, ubicada en la planta baja de la citada área, la cual, personal adscrito a este Organismo pudo constatar que mide aproximadamente 4x4 metros, lo que nos da un total de 16 metros cuadrados, la cual también se constató que es habitada por 8 personas, incluyendo a **VD**; que no cuenta con sanitario, regadera, ni ventilación, así como que el área del OCLADE tiene una capacidad de aproximadamente 44 a 45 personas y que, para el 26 de agosto de 2019, se encontraban un cupo de aproximadamente 70 personas privadas de la libertad.

24. Se hace necesario precisar que, una de las mayores consecuencias que se ha observado de manera directa en los Diagnósticos Nacionales Penitenciarios realizados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, refiere al hacinamiento en las prisiones como el exceso en la relación entre el número de personas en un alojamiento y el espacio o número de cuartos disponibles en éste.[13] De acuerdo con el Índice de Calidad Global de la Vivienda, el hacinamiento se mide a partir del número de personas habitando en una vivienda entre el número de habitaciones con que cuenta ésta; estableciendo parámetros para identificar el hacinamiento en medio y crítico[14], estableciendo como referente la siguiente tabla:

ÍNDICE DE HACINAMIENTO

Personas por dormitorio en la vivienda:	Tipo de hacinamiento:
2, 4 y menos	Sin hacinamiento
2,5 a 4,9	Hacinamiento medio
5 y más	Hacinamiento crítico

25. La valoración de hacinamiento, debe ser en conjunto, cuantitativa y cualitativa, dado que es consecuencia del amontonamiento desordenado de individuos en un mismo lugar, que no se encuentra habilitado para alojarlos en condiciones aceptables, dando como resultado la ruptura de los parámetros de condiciones básicas para la vida, seguridad e higiene porque en esas condiciones los servicios se encuentran notoriamente limitados o en su caso se van suprimiendo, prevaleciendo situaciones de violaciones constantes a derechos humanos.

---

[13]Spicker, Paul, Álvarez Leguizamón, Sonia y Gordon, David. Pobreza un glosario internacional. Editorial CLACSO-CROP. Buenos Aires. 2009. p. 152

[14] Índice de Calidad Global de la Vivienda. Disponible en: http://www.redatam.org/redchl/mds/casen/WebHelp/informaci_n_casen/conceptos_y_definiciones/vivienda/indice_calidad_global_de_la_vivienda.htm

26. Por lo que la insuficiencia de espacios para dormir, escasa ventilación y servicios sanitarios inadecuados, constituyen un riesgo respecto de las condiciones de habitabilidad y genera posibilidades de conflicto entre la población penitenciaria, contraviniéndose con ello lo dispuesto en los artículos 14, 15, fracciones I, II y III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, los cuales establecen las obligaciones de operación y dirección que tiene la Autoridad Penitenciaria con pleno respeto de los derechos humanos.

27. En razón de lo anterior, se destaca que "las personas privadas de la libertad están en una situación de vulnerabilidad, y la actividad gubernamental debe pugnar por el estricto respeto de los derechos humanos. Por lo tanto, quienes se encuentran privados de su libertad en centros carcelarios, aun cuando se encuentran sujetos a un régimen jurídico particular que suspende determinados derechos, ello no significa la suspensión, limitación o anulación de la titularidad de sus demás derechos como seres humanos".[15]

28. En el tema de sobrepoblación, es importante considerar las condiciones en las que se alberga a la población recluida. En la guía complementaria *Agua, saneamiento, higiene y hábitat en las cárceles*[16] elaborada en 2013 por el CICR (Comité Internacional de la Cruz Roja) en coordinación con la ONU, se establece que aun cuando existen recomendaciones de los organismos internacionales, en lo referente a las condiciones de habitabilidad de los espacios destinados para los persona privada de la libertad, como pueden ser las de ventilación, iluminación e higiene, no existe una norma universal respecto a las dimensiones de espacio, señalando las medidas que aproximadamente se manejan en diversos países, siendo en México[17] se manejan 4 m^2 (metros cuadrados, por persona y, en tratándose de celdas triples, hasta 15 m^2.[18]

29. En Opinión del CICR (Comité Internacional de la Cruz Roja) una celda para cuatro personas, en la que se utilizan camas separadas debería medir 13.6 m^2 (3.4 m^2 por recluso × 4, lo que incluye 1.6 m^2 para cada cama). Una celda para cuatro personas en la que se instalan dos literas dobles debería medir 10.4 m^2. Este cálculo se realiza restando el espacio correspondiente a dos camas individuales separadas (1.6 m^2 x 2 que se ahorra usando las literas dobles) de la superficie total necesaria para que cuatro personas duerman en camas individuales separadas (13.6 m^2).[19] Por lo que resulta claro que la habilitada celda número 01, ubicada en la planta baja, del OCLADE, que mide aproximadamente 16 metros cuadrados, en la que habitan 8 personas, es claro que cuentan con un espacio de apenas 2 metros cuadrados cada uno.

30. En el Análisis y Pronunciamiento emitido por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, respecto a la sobrepoblación en los centros penitenciario de la República Mexicana, señaló que, al considerar las recomendaciones de los organismos internacionales que analizan y estudian las mejores prácticas en materia penitenciaria, se puede concluir que éstas convergen en los estándares mínimos para la vida en prisión, reconociendo la existencia de medidas especiales de seguridad como las previstas en la Constitución, señalándose en todo momento el respeto que debe existir a una vida digna y segura, respetuosa de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad[20]. Así, se destacan las siguientes consideraciones:

- Un recluso, una cama.
- Dormitorios que permitan el ingreso de luz natural, aire fresco y ventilación.
- Regímenes carcelarios que permitan un mínimo de 8 horas fuera de celda.
- Derecho y posibilidades de hacer ejercicio físico al menos un día a la semana, incluso para quienes estén en medidas disciplinarias.

---

[15] CNDH. Recomendación 9/2015, "Sobre el caso de violaciones al trato digno y a la reinserción social de los persona privada de la libertads del Centro Federal de Readaptación Social No. 11 ("CPS Sonora"), en Hermosillo, Sonora", del 30 de mayo de 2015, p. 33.
[16]Op. Cit. CICR. 2013. p. 31.
[17]CNDH "LA SOBREPOBLACIÓN EN LOS CENTROS PENITENCIARIOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA", ANÁLISIS Y PRONUNCIAMIENTO, Introducción, páginas 14 y 15.
[18] Centros de Prevención y Readaptación Social, Normas de Diseño, Secretaría de Gobernación. México, 1982.
[19]Op. Cit. CICR. 2013. p.35.
[20]Página 25

- Derecho y posibilidades de participar en actividades recreativas que promuevan el bienestar físico y mental.
- Espacios físicos donde exista la higiene.
- Acceso a atención sanitaria.
- Espacios físicos que garanticen los vínculos familiares.
- Dieta alimenticia balanceada
- Comedores y cocinas higiénicas.
- Especial atención a mujeres en reclusión, así como a los hijos que conviven con ellas.
- Atención y clasificación para personas en condiciones de vulnerabilidad.
- Respeto a las características socioculturales de las personas privadas de libertad.

31. Los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas[21] plantean a los Estados Parte elementos a considerar, a fin de salvaguardar derechos y libertades fundamentales de los reclusos, entre éstos se mencionan los siguientes: Principio I Trato humano *"… y tomando en cuenta la posición especial de garante de los Estados frente a las personas privadas de libertad, se les respetará y garantizará su vida e integridad personal, y se asegurarán condiciones mínimas que sean compatibles con su dignidad."*

32. También los principios XII, XVII y XXV señalan en el Principio XII, numeral 1, denominado albergue, condiciones de higiene y vestido que "Las personas privadas de libertad deberán disponer de espacio suficiente, exposición diaria a la luz natural, ventilación y calefacción apropiadas, según las condiciones climáticas del lugar de privación de libertad. Se les proporcionará una cama individual, ropa de cama apropiada, y las demás condiciones indispensables para el descanso nocturno. […]", en el numeral 2, establece las condiciones de higiene, por lo que señala que "Las personas privadas de libertad tendrán acceso a instalaciones sanitarias higiénicas y suficientes, que aseguren su privacidad y dignidad."

33. En los Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos, [22] se hace referencia a la obligación para todos los Estados Parte de respetar la dignidad humana, derechos y libertades fundamentales de las personas privadas de la libertad, señalando que: "1. Todos los reclusos serán tratados con el respeto que merecen su dignidad y valor inherentes de seres humanos. […] 5. Con excepción de las limitaciones que sean evidentemente necesarias por el hecho del encarcelamiento, todos los reclusos seguirán gozando de los derechos humanos y las libertades fundamentales consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y, cuando el Estado de que se trate sea parte, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo, así como de los demás derechos estipulados en otros instrumentos de las Naciones Unidas."

34. Bajo las premisas de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, aprobada por la Asamblea General de la ONU en 1984, el Relator Especial nombrado por ese organismo internacional para examinar las cuestiones relativas a la tortura[23], señaló que el hacinamiento puede ser identificado como una pena cruel, inhumana y degradante, cuando sobrepasa el nivel crítico.[24] Es importante considerar que estas condiciones se han evidenciado también desde el Informe sobre la visita a México del Subcomité para la Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, presentado por el Subcomité, en el mes de mayo de 2010, donde plantea, en el numeral 177, que: *"el hacinamiento no sólo constituye un trato inhumano o degradante, sino también un factor desencadenante de violencia…. y los conflictos que genera*

[21] Aprobados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través de la Resolución 01/08, en su 131º período ordinario de sesiones, celebrado del 3 al 14 de marzo de 2008.
[22] Adoptados y proclamados por la Asamblea General de la ONU, en su resolución 45/111, de 14 de diciembre de 1990.
[23] El Relator Especial visitó México entre el 21 de abril y el 2 de mayo de 2014
[24] Cfr. Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Juan E. Méndez, del 29 de diciembre de 2014 (A/HRC/28/68/Add.3)

entre las personas privadas de libertad, acarrea al Estado Parte una responsabilidad, incluso de carácter internacional…"

35. De igual manera, en el informe, el Subcomité contra la Tortura, establece en el numeral 198, las siguientes recomendaciones para mejorar las condiciones materiales dentro de los centros penitenciarios:

- Los locales destinados a los reclusos deben tener ventilación y calefacción adecuada, según sea el caso (RMTR, art. 10);
- Los locales destinados a los reclusos deben tener iluminación natural, aire fresco y luz artificial suficiente (RMTR, art. 11);
- Las instalaciones sanitarias deben ser adecuadas y decentes (RMTR, art. 12);
- Las instalaciones de baño y de ducha deben ser adecuadas (RMTR, art. 13);
- Los reclusos deben disponer de artículos higiénicos (RMTR, art. 15);
- Los reclusos deben disponer de una cama individual y ropa de cama individual suficiente (RMTR, art. 19);
- Los reclusos deben recibir alimentación de buena calidad, bien preparada y servida y agua potable (RMTR, art. 20).

36. Esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas acoge estas interpretaciones jurídicas como criterios aplicables al considerar que constituyen un elemento que debe observarse para extender el alcance de tales derechos, lo cual se inscribe en la protección más amplia y extensiva que este Organismo reconoce, en cumplimiento al mandato contenido en el artículo 1°, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

37. En este punto, resulta importante destacar que el entonces Director del Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas, Teniente Coronel **AR2SSP**, al rendir su informe se concretó a señalar que desconocía porqué **VD** fue agredido, señalándolo como "una persona conflictiva que ha tenido problemas en toda el área de población". Asimismo, aceptó que fue reubicado en dos ocasiones dentro del área denominada OCLADE (Área de Observación, Clasificación y Desintoxicación), la última, en la parte inferior, en donde, afirma, se cuenta con servicio sanitario y de regadera, pero en el área común, teniendo acceso a ellos cada que los necesitaba.

38. En este punto y para mayor claridad, resulta trascendente tener en claro los movimientos o reubicaciones que en los últimos meses de vida del aquí quejoso **VD**, se dieron al interior del Centro Penitenciario, para lo cual, se hace necesario remitirnos a sus comparecencias y a las constancias que obran en la carpeta administrativa de ejecución (...):

Área	Celda	Número de personas que habitan, incluyendo a **VD**	Fecha aproximada	Fecha en que fue agredido **VD**
Población	Sin dato	Sin dato	Hasta el 07 de julio de 2019	El 07 de mayo y 08 de julio de 2019[25]
OCLADE	09, planta alta	6	A partir del 08 de julio de 2019[26]	Domingo 04 de agosto de 2019[27]
OCLADE	01, planta baja	8	20 de agosto de 2019	01 de septiembre de 2019[28]
OCLADE	En el pasillo[29]	Sin dato	04 de septiembre	08 de septiembre

[25]Información proporcionada por el Teniente Coronel **AR2SSP,** mediante el oficio (...), suscrito el 29 de mayo de 2019, foja 50 de la carpeta administrativa (...). Así como del escrito presentado por **VD** el 03 de septiembre de 209, ante el Juez de Ejecución de Sanciones Penales.
[26]Según se desprende del escrito presentado por la AR3DGDP**,** entonces Defensora Pública de **VD**, foja 80 y 81 del anexo presentado tanto por ella como por el Juez de Ejecución de Sanciones Penales
[27]Información proporcionada por **VD** mediante escrito de 06 de agosto de 2019. Así como del informe rendido por **SP14,** Primer Comandante del Segundo Grupo de Guardia, foja 123, *ídem*.
[28]Información proporcionada el 02 de septiembre de 2019 por **VI,** y constatada por personal de este Organismo el 04 de septiembre siguiente.
[29]Información proporcionada por **VD** y corroborada mediante el oficio (...), suscrito por el Teniente Coronel **AR2SSP,** entonces Director del Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas y del informe rendido el 10 de septiembre de 2019, por **SP14,** Primer Comandante del Segundo Grupo de Guardia, del mismo Centro.

			de 2019[30]	de 2019[31]
OCLADE	Celda 2, bloque B, planta baja	Solo[32]	(...)[33]	Pérdida de la vida, (...)[34]

39. Por tanto, con la información obtenida en las constancias que forman parte del expediente de queja, se puede constatar que **VD,** previo a su deceso acontecido el (...), fue reubicado en por lo menos en 4 ocasiones, esto, en un lapso de tiempo de 2 meses 5 días, del 08 de julio al (...).

40. Al momento en el que **VD** denunció las condiciones de vida en las que se encontraba al interior del Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas, el 21 de agosto de 2019, éste se encontraba en el área de OCLADE, planta baja, habitación o celda 01, con 7 personas más, lugar en el que afirmó no cuenta con servicio de sanitario, de regadera, ni de ventilación, que los pleitos ahí dentro eran frecuentes, además de tener que realizar una de sus necesidades fisiológicas en botellas de plástico que tenían dentro de la propia celda, en donde permanecían las 24 horas del día y no contaban con actividades de reinserción social.

41. Al respecto, personal adscrito a este Organismo, se apersonó en las citadas instalaciones el 26 de agosto de 2019, en donde se pudo apreciar que el lugar en donde se encontraba **VD**, al fondo del pasillo del OCLADE, es una habitación adecuada como celda que mide aproximadamente 4 metros por 4 metros, encontrando al quejoso, en compañía de 7 personas, al observar el lugar se pudo percatar de la escasa ventilación e iluminación, así como que carece de sanitario y literas, con un montículo de cobijas y botellas con líquido amarillo en su interior sobre el piso, lo que, a decir de los ocupantes del lugar, es en donde realizan la micción, pues al preguntarles en dónde hacían sus necesidades fisiológicas, respondieron que ahí no tenían sanitario, que los custodios los llevaban a un baño ubicado en el pasillo, pero para orinar contaban con botellas o botes.

42. Con lo anterior, se da cuenta de la veracidad del dicho de **VD**, al señalar que en el área del OCLADE, planta baja, celda 01, se encontraba en condiciones inhumanas de vida, por estar en un dormitorio de aproximadamente 4x4 metros, con otras 7 personas, quienes no cuentan con sanitario, regadera, ventilación y, en la inspección se pudo constatar que, en ese momento, no se contaba con camas o literas para dormir, advirtiendo cobijas apiladas sobre el suelo, lo que hace suponer que es ahí donde dormían las 8 personas, quienes, según la dimensión de la habitación, contaban con apenas 2 metros cuadrados para cada uno, lo que de sí, hace difícil la convivencia.

43. Luego, existen constancias que, concatenadas con los elementos de prueba anterior, nos llevan a la convicción que, en diferentes momentos de la estancia de **VD** en el Centro Penitenciario, se encontró en esas mismas condiciones, pues de la carpeta administrativa de ejecución de sanciones penales (...), se desprende el escrito dirigido al Juez de Ejecución de Sanciones el 12 de julio de 2019, por la entonces Defensora Pública de **VD, AR3DGDP**, en donde hizo referencia: "informo que el día 11 de julio a entrevistarme con el sentenciado **VD** quien ratificó su escrito en virtud de que fue agredido en el área de población, por lo que fue trasladado al OCLADE lugar en el que aparte de estar acinado (sic) no cuenta con los medios para su reinserción…", con lo que queda claro que en la celda 09, planta alta, del OCLADE, en donde compartía el lugar con otras 5 personas, de acuerdo a los estándares señalados en párrafos precedentes, por el cupo por habitación o celda, también se encontraba, por el tiempo

[30]Según lo expresado por **VD**, en comparecencia de 04 de septiembre ante personal de este Organismo.
[31]Información proporcionada el 09 de septiembre de 2019, por **VI,** y constatada por personal de este Organismo, el 10 de septiembre siguiente.
[32]Según se aprecia de las fotografías anexas el 17 de septiembre de 2019, por el Juez de Ejecución de Sanciones Penales. Así como con la declaración efectuada el 03 y 22 de octubre de 2019, por **SP3** y **SP5**, elementos de seguridad y custodia del CERERESO.
[33]En cumplimiento a la suspensión de plano, decretada por el Juez de Distrito dentro del Juicio de Amparo (...), en donde ordenó, entre otras cosas, "Se le otorgue al ahora quejoso una celda adecuada en la cual pueda tener sus pertenencias"
[34] Información proporcionada el 17 de septiembre de 2019, por el Licenciado **SP1,** Juez de Ejecución de Sanciones Penales, al que anexó el parte informativo suscrita por el Teniente Coronel **AR2SSP,** presentado ante él, en la misma fecha.

que ahí permaneció (del 08 de julio al 19 de agosto de 2019, aproximadamente), en hacinamiento.

44. Resulta necesario resaltar que, si bien es cierto, **en forma general** y de conformidad con el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2019, emitido por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en el Centro Regional de Reinserción Social Varonil, de Cieneguillas, Zacatecas, a la fecha de la visita, 24 de abril de 2019, no existía problemas de sobrepoblación o hacinamiento, pues, en relación a la totalidad del número de internos existentes y la capacidad del Centro, se calificó como apropiada la atención en el Rubro I, de los aspectos que garantizan la integridad personal del interno, por el número de personas privadas de la libertad en relación a la capacidad del centro.

45. Sin embargo, es necesario precisar que dicho Diagnóstico Nacional de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no hace referencia específica del OCLADE, lugar en el que sí existía hacinamiento y atendiendo a éste caso en particular, en el Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas, se sometió a **VD** al hacinamiento o sobrepoblación, por lo menos en dos ocasiones, esto es, al reubicarlo, del área de población al área del OCLADE, inicialmente en la celda ubicada en la planta alta, habitación número 09, donde cohabitaba con otras 5 personas, la segunda en la habitación habilitada como celda, con numeración 01, de la planta baja, en donde convivía con 7 personas, lo que trajo consecuencias, las previstas en párrafos precedentes, como incidencia de manera negativa en la gobernabilidad, menoscabo del desarrollo de las actividades que se realizan en el interior, así como un ambiente propicio para los actos de violencia, falta de control e ingobernabilidad, por la inequidad debido a la mayor cantidad de personas privadas de la libertad ante el menor número de empleados de las instituciones penitenciarias, insuficiencia de servicios básicos de alojamiento en condiciones de vida digna en prisión y falta de oportunidades reales de acceso a los medios para lograr la reinserción social efectiva, en el presente caso nos abocaremos a las siguientes:

- Incidencia negativa en la gobernabilidad.

46. El autogobierno es un tipo de gobierno con estructura organizada a partir de una jerarquía de mando, mediante el cual un grupo de personas privadas de la libertad impone métodos informarles de control y realiza actividades ilícitas intramuros, situación contraria al régimen interior que legalmente debe de prevalecer en un centro, lo que menoscaba el respeto a los derechos humanos de las demás personas privadas de la libertad.

47. Entre los efectos negativos que puede generar el autogobierno se encuentra el aumento de la violencia al interior de los centros, la extorsión y el tráfico de sustancias prohibidas, además de la presencia de privilegios y tratos especiales para algunas personas privadas de la libertad.

48. Las deficiencias normativas, de personal y de infraestructura son premisas para la aparición de grupos de poder, conformados generalmente por las personas privadas de la libertad, quienes imponen reglas a la vida carcelaria, originando el autogobierno, contexto en el que la convivencia se torna intolerable y da lugar a disturbios, siendo uno de los puntos de partida el mantener el poder y el control del establecimiento penitenciario.

49. El Estado está obligado a garantizar la gobernabilidad en los establecimientos para que ninguna persona privada de la libertad desempeñe funciones de autoridad, empleo o cargo alguno en los centros, tenga prerrogativas o privilegios sobre otros ni ejercer poder disciplinario respecto de sus compañeros.

50. En este punto, se hace necesario retomar parte del informe rendido por el entonces Director del Centro Regional de Reinserción Social Varonil, de Cieneguillas, Zacatecas, quien expresó que **VD** era una “persona conflictiva que ha tenido problemas en toda el área de población por lo que debido además a que se trata de grupos antagónicos no cabe ya en dicha área, motivo por el que fue reubicado en el OCLADE por su seguridad, sin embargo se metió también en

problemas con las personas privadas de la libertad de dicha área por lo que tuvo que ser nuevamente reubicado en el área inferior del oclade…", lo que deja en claro la existencia de ingobernabilidad entre la población penitenciaria; siendo que la gobernabilidad corresponde única y exclusivamente a la autoridad penitenciaria.

- Ambiente propicio para actos de violencia.

51. Como se aprecia en el recuadro inserto, del área de población **VD** tuvo que ser reubicado al área de OCLADE, pues el 07 de mayo de 2019, fue agredido, conjuntamente con dos personas más, sin haberse percatado sobre quién o quiénes lo lesionaron; luego, el 08 de julio siguiente, fue reubicado en la celda 09 de la planta alta del OCLADE, con 5 personas más de quienes identificó (...), lugar en el que el domingo 04 de agosto fue agredido físicamente; luego, el 20 de agosto de 2019, como medida especial de vigilancia, fue trasladado a la planta baja del mismo OCLADE, en donde, como se constató, habitaba conjuntamente con 7 personas más, siendo agredido nuevamente el 01 de septiembre; la siguiente medida tomada por el personal del Centro Penitenciario, fue dejarlo en el área del pasillo, esto el 04 de septiembre siguiente, siendo agredido en ese lugar a escasos 4 días, es decir, el 08 de septiembre; finalmente, el 13 de septiembre y en cumplimiento a las medidas de suspensión decretadas en el juicio de amparo (...) del índice del Juzgado Primero de Distrito, residente en esta ciudad de Zacatecas, fue reubicado solo a la celda 2, del bloque B, en la planta baja del mismo OCLADE, en donde en esa misma fecha falleció.

52. Por lo que queda claro que, en el caso particular, no se atendió eficazmente el ambiente de violencia que sufría constantemente **VD** pues incluso, para justificarse, la entonces máxima autoridad dentro del Centro Penitenciario, exclamó el calificativo de que se trataba de una persona conflictiva, en lugar de asumir su papel de garante frente a éste.

53. No pasa inadvertido que el 21 de agosto de 2019, mientras personal adscrito a este Organismo, se encontraba en entrevista con **VD** pudo constatar el momento en el que entre el pasillo y celdas del área del OCLADE, se suscitó un conato de violencia entre las personas privadas de la libertad, por lo que es una clara muestra de los efectos que produce el hacinamiento o sobrepoblación.

- Falta de control e ingobernabilidad.

54. La falta de control e ingobernabilidad, se advierte de las diversas ocasiones en las que **VD** fue agredido, sin que nadie haya podido evitarlo, además por el poco personal de seguridad y custodia que realiza funciones de vigilancia en ese lugar, pues del acta circunstanciada suscrita por personal de este Organismo, se advierte que, el 21 de agosto de 2019, solamente se encontraban 2 elementos en el área del pasillo, por lo que resultan insuficientes para mantener el orden y la disciplina.

- Insuficiencia de servicios básicos de alojamiento en condiciones de vida digna en prisión.

55. Como se precisó, por lo menos en la celda 01 de la planta baja del OCLADE, **VD** vivía conjuntamente con otras 8 personas, esto del 20 de agosto al 03 de septiembre de 2019, en donde tuvo que dormir en el suelo y orinar en botellas y, cuando sus necesidades fisiológicas eran diferentes, tenía que llamar a la puerta para que un guardia de seguridad y custodia lo trasladara al sanitario, a la regadera o a cepillarse los dientes, no existía ventilación en esa celda, lo que en absoluto son condiciones aceptables de vida, sin ninguna seguridad e higiene, porque, en esas condiciones, los servicios se encontraban notoriamente limitados o suprimidos, por lo cual sufrió situaciones de violaciones constantes a sus derechos humanos.

56. Se advierte también que, a partir del 04 de septiembre de 2019, fue reubicado al pasillo del OCLADE, en donde es claro que un pasillo no es un área prevista internacionalmente, a nivel nacional o local para la estancia digna de una persona privada de la libertad, pues, al igual que las habitaciones habilitadas como celdas en esa área, no cuenta con los servicios básicos.

Luego, siendo este lugar en donde se realizan funciones de vigilancia por parte de los elementos de seguridad y custodia, el 08 de septiembre de 2019, nuevamente fue agredido físicamente, en la que señaló la anuencia del propio personal de seguridad, quienes abrieron el candado para dar acceso al espacio que él ocupaba, el pasillo.

57. Respecto de esta última reubicación a agresión física, se cuenta con la declaración de los elementos de seguridad y custodia **SP5, SP6** y **SP7,** pudieron constatar que, mientras se encontraba en el área del pasillo, se presentó con heridas en los brazos y cuello, motivo por el cual tuvieron que trasladarlo en ambulancia al área médica del mismo Centro.

58. Finalmente, el (...), fue reubicado del área del pasillo del OCLADE a la celda 2, del bloque B, en la planta baja, en donde entre las 14:45 y las 18:02 horas, perdió la vida, lo anterior fue informado por el **SP1,** Juez de Ejecución de Sanciones Penales, al hacer llegar a este Organismo, copia del parte informativo suscrito por el Teniente Coronel **AR2SSP,** entonces Director del Centro Penitenciario, al que agregó fotografías con fecha y hora siguientes: (...) 18:19, correspondiente al pasillo del OCLADE; (...) 18:20, apreciándose el cuerpo de **VD** semi-acostado, con la cabeza en alto, recargada sobre una puerta, al parecer de madera, cerrada, su mano derecha sobre una cobija, así como lo que parece ser utensilios de cocina y/o alimentos sobre el suelo; en otra fotografía, con un panorama más amplio, se aprecia que es una habitación prácticamente vacía, no se observa cama, plancha o colchoneta, pero sí objetos sobre el piso.

59. Por lo cual, si parte de las obligaciones de las autoridades penitenciarias son la integración de la seguridad, el control y la justicia, para evitar que el orden se colapse, así como otorgar a las personas bajo su cuidado una estancia digna, un trato equitativo y respetuoso de los derechos humanos, tendente a lograr la reinserción social efectiva, con los cuales se propicia una adecuada gobernabilidad dentro de la institución penitenciaria, queda claro que en la especie no se cumplió con el equilibrio de esos factores.

- Oportunidades reales de acceso a los medios para lograr la reinserción social efectiva.

60. La reinserción, según lo refiere el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, prevé un conjunto de actividades y programas que se diseñan y aplican para permitir a las personas condenadas a pena privativa de la libertad en los establecimientos de reclusión su regreso a la sociedad, cuestión que, como reconoce la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 18, no es posible sin una instrucción previa, creadora o revitalizadora de habilidades y hábitos laborales, así como la atención de la salud, la educación y el deporte[35].

61. El respeto a los derechos humanos al trabajo, a la capacitación, a la educación, a la salud, a la cultura, al deporte y al esparcimiento, es la vía para la reinserción social de las personas privadas de la libertad, tal como se prevé en los artículos 18, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10 y 11 de la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados; ordinales 24, fracciones VIII, IX y XII, de la Ley del Sistema Penitenciario y Ejecución de Sanciones del Estado de Zacatecas, pero no se cumplieron en el CERERESO de Cieneguillas, Zacatecas, con **VD**.

62. El objetivo primordial del sistema penitenciario es la readaptación y reinserción social, la prevención del delito y la reintegración a la vida familiar de las personas que cometieron ilícitos; por ello, las citadas actividades deben contribuir de manera positiva en el tratamiento que se brinde a cada uno de las personas privadas de la libertad, sin perder de vista que, si bien es cierto en el caso de los procesados aún no se les imputa responsabilidad en un ilícito, con la prisión preventiva se busca también, entre otras cosas, que mantengan o adquieran pautas de comportamiento y de convivencia aceptadas en la sociedad; sin embargo, para procesados y sentenciados (como es el caso de **VD**), es indispensable el respeto al trato digno puesto que,

[35]Jurisprudencia publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, página 124, Registro 2005105

independientemente de su situación jurídica, son personas privadas de su libertad a las cuales no deben generárseles actos injustificados, como lo es, la irregularidad en la realización de actividades laborales, educativas y recreativas, que permiten el sano esparcimiento y convivencia, lo cual se dificulta cuando se enfrentan condiciones de sobrepoblación en los centros penitenciarios, como en el presente caso, puesto que en una de las visitas realizadas se observó que **VD** cohabitaba conjuntamente con 7 personas más, en un espacio adaptado para celda, con dimensiones aproximadas de 4x4 metros.

63. Se advierten en la carpeta administrativa de ejecución (...), escritos elaborados por **VD**, mediante los cuales hacía de manifiesto las condiciones de vida que llevaba durante su internamiento en el Centro Penitenciario; refiriendo expresamente la nula readaptación social. Así, el 14 de junio de 2019, expresó su deseo de reincorporarse al área de población, para acudir a la escuela, a psicología, a alcohólicos anónimos, neuróticos anónimos y demás actividades; el 11 de julio de 2019, suscribió uno diverso en el que expuso “en el dormitorio en el que me encuentro no hay actividades ni nada (…) es evidente y claro a todas luces que me encuentro digámoslo incomunicado a todas las áreas que brinda el Centro y yo hoy en día busco mi salida aplicándome a una reinserción social con fundamento legal artículo 23, 91, 92, 118, 119 y demás relativos de la Ley del Sistema Penitenciario u de Ejecución de Sanciones del Estado de Zacatecas…”.

64. Si la población penitenciaria permanece encerrada en sus estancias sin hacer actividades ocupacionales o talleres, como lo expuso **VD**, se quebrantan los referidos preceptos, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados; y de la Ley del Sistema Penitenciario y Ejecución de Sanciones del Estado de Zacatecas.

65. La importancia de proveer actividades y tareas que mantengan ocupados a las personas privadas de la libertad fuera de sus celdas durante el día, es parte significativa para su desarrollo y tratamiento pues, de lo contrario, la inactividad podría ocasionar que ocupen su tiempo ocioso en la planeación y comisión de conductas delictivas, frustraciones y resentimientos, al tratarse de un doble encarcelamiento dentro de la prisión. Cada una de las actividades destinadas a las personas privadas de la libertad, deben contribuir de manera positiva en el tratamiento penitenciario, inculcando en la población el sentido de responsabilidad y promoviendo su interés en su formación laboral, académica y deportiva.

66. Por lo anterior, queda acreditado fehacientemente que una vez que **VD** fue reubicado del área de población a la del OCLADE, el 08 de julio de 2019 y hasta el 13 de septiembre siguiente, fecha en la que perdió la vida, no tuvo acceso a espacios dignos para dormir, los espacios en donde lo ubicaban tenían escasa ventilación y servicios sanitarios eran inadecuados, es decir, durante su estancia en esa área vivió con riesgos respecto de las condiciones de habitabilidad, lo que generó conflictos entre la población penitenciaria; además, que permaneció en su celda o espacio asignado con el fin de contención, sin recibir ninguno de los rubros de la reinserción social, contraviniéndose con ello lo dispuesto en los artículos 14, 15, fracciones I, II y III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que dicen:

> Artículo 14. De la Autoridad Penitenciaria
> La Autoridad Penitenciaria organizará la administración y operación del Sistema Penitenciario sobre la base del respeto a los derechos humanos, el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte, como medios para procurar la reinserción de la persona sentenciada a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, y supervisará las instalaciones de los Centros Penitenciarios para mantener la seguridad, tranquilidad e integridad, de las personas privadas de la libertad, del personal y de los visitantes, ejerciendo las medidas y acciones pertinentes para el buen funcionamiento de éstas.
> Corresponde al Poder Ejecutivo Federal o Local, según su competencia, a través de las Autoridades Penitenciarias señaladas en las disposiciones legales, la ejecución material de la prisión preventiva, así como de las sanciones y medidas de seguridad previstas en las leyes penales, así como la administración y operación del Sistema Penitenciario.

> Artículo 15. Funciones de la Autoridad Penitenciaria
> La Autoridad Penitenciaria deberá llevar a cabo las siguientes funciones básicas:
> I. Garantizar el respeto a los derechos humanos de todas las personas que se encuentren sujetas al régimen de custodia y vigilancia en un Centro Penitenciario;
> II. Procurar la reinserción social efectiva mediante los distintos programas institucionales;
> III. Gestionar la Custodia Penitenciaria;

67. Finalmente, es de advertirse que, la falta de reinserción social de **VD** no pasó inadvertido para las autoridades penitenciarias, como el entonces Director General de Prevención y Reinserción Social del Estado, **AR1SSP**, pues el 12 de julio de 2019, la Defensora Pública **AR3DGDP**, le hizo llegar una promoción, en donde, además de solicitarle valorara el posible traslado a cualquier centro penitenciario distrital, le señala que a partir del 08 de julio de esa anualidad **VD** fue cambiado del área de población, a la del OCLADE, en donde no recibía la atención técnica interdisciplinaria que establece la Ley del Sistema Penitenciario y Ejecución de Sanciones del Estado. Así como del entonces Director del Centro Penitenciario Teniente Coronel **AR2SSP,** quien el 10 de septiembre de 2019, hizo llegar a su superior jerárquico, Director General de Prevención y Reinserción Social del Estado, el informe al que anexó el diverso firmado por **SP14,** primer comandante del segundo grupo de guardia, en el que refiere que **VD** permanecía en el área del pasillo de la planta baja del OCLADE "en donde permanece durante el día y duerme por la noche…"

68. Además, mediante la suspensión decretada por el Juez Federal dentro del juicio de amparo (...), se ordenó, entre otras cosas, que se le otorgara a **VD "**una celda adecuada en la cual pueda tener sus pertenencias; se le permita salir a las áreas de trabajo y realizar actividades que se impartan en el interior del centro". Lo anterior en virtud de que, en el caso de la entonces persona privada de la libertad **VD**, no se cumplían los estándares internacionales, nacionales y locales para el respecto de sus derechos humanos, para la debida reinserción social que toda persona privada de libertad tiene, esto es el derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal, sin que se haya garantizado.

69. No se soslaya el contenido del artículo 2º de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública (LGSNSP) que prevé como finalidad de ésta "salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos y comprende la prevención especial y general de los delitos, la investigación para hacerla efectiva, la sanción de las infracciones administrativas, así como la investigación y la persecución de los delitos y la reinserción social del individuo".

70. Por tanto, esta Comisión considera que en el Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas, no se ha dado atención a los requerimientos para mantener el control y la seguridad, deficiencias que pueden derivar en conductas violentas para la población interna como fue el caso de **VD**, contrario a lo estipulado en el artículo 15, de la Ley del Sistema Penitenciario y Ejecución de Sanciones del Estado de Zacatecas, en el cual se señala "La persona privada de la libertad será tratada humanamente, con irrestricto respeto a su dignidad inherente, a su seguridad e integridad física, psicológica y moral y a sus derechos humanos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales, la Constitución Política del Estado, esta Ley y demás normas jurídicas aplicables."

71. En ese contexto, en el Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas, se ven afectados los derechos al trato digno y reinserción social de las personas privadas de la libertad al no efectuar acciones inmediatas con resultados a corto plazo; pues el respeto de los derechos de las personas privadas de la libertad requiere de una constante supervisión para contribuir a un funcionamiento razonablemente pacífico de los centros de reclusión, lo que en tiempos de la administración a la que se ha hecho referencia la presente recomendación, es decir, cuando se encontraba como Director del Centro el Teniente Coronel **AR2SSP**, no ocurría, pues en la supervisión realizada por la Comisión Nacional de los

Derechos Humanos, el 24 de abril de 2019, detectó que es importante presentar atención en el Rubro I, denominado aspectos que garantizan la integridad personal de la persona privada de la libertad, señalando expresamente la supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular[36].

72. Las omisiones en las que incurrieron las autoridades penitenciarias en el caso de **VD**, obstaculizó una adecuada reinserción social y una nula protección de sus derechos humanos, contraviniendo lo estipulado en los artículos 1°, párrafos primero, segundo y tercero, así como 18, párrafo segundo constitucionales que establecen la obligación del Estado para garantizar la creación de las condiciones apropiadas para los sentenciados. En ese sentido, el Comité de Derechos Humanos ha afirmado que mantener detenida a una persona en una celda reducida, veintitrés horas al día, aislada de los demás presos, (…), sin tener en qué ocuparse y sin que se le permita trabajar ni estudiar, constituye una violación a su derecho a ser tratado humanamente y con el debido respeto a la dignidad inherente al ser humano[37].

73. Garantizar los derechos al trato digno y a la reinserción social implica el compromiso del Estado para generar acciones tendentes a proporcionar los recursos necesarios para aumentar la plantilla de personal tanto para la custodia adecuada de la población como para su atención integral, así como el generar espacios suficientes para albergar a la población penitenciaria, evitando con ello la existencia de sobrepoblación, hacinamiento y existencia de grupos de control.

74. El artículo 9 de la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé que “Las personas privadas de su libertad (…) durante la ejecución de la prisión preventiva o las sanciones penales impuestas, gozarán de todos los derechos previstos por la Constitución y los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, siempre y cuando éstos no hubieren sido restringidos por la resolución o la sentencia, o su ejercicio fuese incompatible con el objeto de éstas”.

75. En el caso en estudio se han incumplido diversos instrumentos internacionales, destacándose los numerales 1° de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 10.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 5.1, 5.2 y 11.1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; Principios 1, 3, 5.1 y 7.1, del Conjunto de Principios para la Protección de todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión; y los principios 1, 4 y 5, de los Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos, en los cuales se reconoce el derecho de toda persona a que sea tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. “En este sentido, los Estados no pueden invocar privaciones económicas para justificar condiciones de detención que no cumplan con los estándares mínimos internacionales en esta área y no respeten la dignidad del ser humano.”[38]

76. Es importante puntualizar que “la labor penitenciaria implica no sólo la reclusión sino enfatizar acciones, métodos y técnicas encaminadas al acompañamiento y trabajo técnico. La función penitenciaria es justo desarrollar competencias para la vida, que permitan a las personas internas contar con habilidades para resolver los obstáculos en su vida cotidiana,”[39].

77. Es menester que las autoridades penitenciarias del Estado diseñen e implementen programas integrales a efecto de erradicar la sobrepoblación, el hacinamiento y las condiciones de autogobierno que imperan en el Centro Regional de Reinserción Social Varonil, de Cieneguillas, Zacatecas, consolidando un sistema penitenciario eficaz y respetuoso de los derechos humanos. Particularmente, deberá realizar las mejoras estructurales en el área del OCLADE (Observación, Clasificación y Desintoxicación) para que se cuente con sanitarios, regaderas, lavabos, planchas, colchones y/o colchonetas y, en caso de no atender estas recomendaciones, no sean utilizadas como estancias para las personas privadas de la libertad.

---

[36] CNDH Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2019, página 456

[37] Corte IDH. Caso Raxcacó Reyes Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Serie C No. 133. Párrafo 96

[38] Caso “Vélez Loor vs. Panamá”. Sentencia de 23 de noviembre de 2010, párr. 198

[39] CNDH. Pronunciamiento “Perfil del Personal Penitenciario en la República Mexicana” Párr 43.

78. La realización de políticas públicas en materia penitenciaria necesariamente requiere que se tome en consideración las carencias de los centros de reclusión, para dotarlos con recursos suficientes y garantizar una estancia digna y segura, en apego a lo establecido en el artículo 18 de nuestra Constitución Federal.

B) DERECHO DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD A QUE SE PROTEJA SU INTEGRIDAD PERSONAL.

79. El derecho a la integridad personal es aquél que tiene todo sujeto para no sufrir tratos que afecten su estructura corporal, sea física, fisiológica o psicológica, o cualquier otra alteración en el organismo que deje huella temporal o permanente, que cause dolor o sufrimiento grave con motivo de la injerencia o actividad dolosa o culposa de un tercero.[40]

80. Al respecto, la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 3 establece, que "[t]odo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona." De ahí que, la obligación de velar por el respeto y garantía de los derechos humanos, corresponde al Estado, como ente garante de éstos. En ese contexto, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, señala en su artículo 1.1, que los Estados, "se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción" sin discriminación alguna. Estas obligaciones generales de respeto y garantía, vinculantes para el Estado con respecto a toda persona, implican para éste un mayor nivel de compromiso al tratarse de personas en situación de riesgo o vulnerabilidad."[41]

81. En ese sentido, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, precisa en su artículo 5.2, que "[t]oda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano."[42]Incluso, la Comisión Interamericana otorga especial atención a la situación de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad física, ya que, el hecho de que tales personas se encuentren en una situación de especial vulnerabilidad, aunado a la frecuente falta de políticas públicas al respecto que otorguen la prioridad que el tema merece, implica frecuentemente que las condiciones penitenciarias se caractericen por la violación sistemática de los derechos humanos de tales personas.[43]

82. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, respecto de la obligación del Estado como garante de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, ha establecido que "[e]n los términos del artículo 5.2 de la Convención toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal y el Estado debe garantizarle el derecho a la vida y a la integridad personal. En consecuencia, el Estado, como responsable de los establecimientos de detención, es el garante de estos derechos de los detenidos."[44]Además, ha establecido que "de las obligaciones generales de respetar y garantizar los derechos, derivan deberes especiales, determinables en función de las particulares necesidades de protección del sujeto de derecho, ya sea por su condición personal o por la situación específica en que se encuentre…".[45]

83. Asimismo, ha señalado que "[f]rente a las personas privadas de libertad, el Estado se encuentra en una posición especial de garante, toda vez que las autoridades penitenciarias ejercen un fuerte control o dominio sobre las personas que se encuentran sujetas a su custodia. De este modo, se produce una relación e interacción especial de sujeción entre la persona privada de libertad y el Estado, caracterizada por la particular intensidad con que el Estado

---

[40]CNDH Recomendación 69/2016 de fecha 28 de diciembre de 2016, párr. 135 y Recomendación 71/2016 del 30 de diciembre de2016, párr. 111.

[41] Informe sobre los derechos humanos de las personas privadas de libertad en la Américas. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, https://www.oas.org/es/cidh/ppl/docs/pdf/ppl2011esp.pdf, párr. 46, de fecha de acceso 11 de julio de 2017.

[42]CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS (Pacto de San José), http://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm, fecha de consulta 21 de febrero de 2018.

[43] Segundo Informe sobre los Derechos Humanos en el Perú. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cap. IX, párr.1, https://www.cidh.oas.org/countryrep/Peru2000sp/capitulo9.htm, fecha de acceso 11 de julio de 2017.

[44]CrIDH. Caso Neira Alegría y otros Vs.Perú, Sentencia de 19 de enero de 1995, párr. 60.

[45] Caso Vélez Loor Vs. Panamá, Sentencia de 23 de noviembre de 2010 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), párr. 98

puede regular sus derechos y obligaciones y por las circunstancias propias del encierro, en donde al recluso se le impide satisfacer por cuenta propia una serie de necesidades básicas que son esenciales para el desarrollo de una vida digna."[46]

84. De ahí que, cuando el Estado priva de la libertad a una persona, asume una responsabilidad especial relacionada con el respeto y la garantía de sus derechos; ya que, tanto la seguridad como la integridad de éstas, queda bajo su custodia. Por ello, uno de los principales deberes del Estado consiste en ejercer un control efectivo sobre la seguridad interna de los centros penales a su cargo. Pues en la medida en que sea capaz de garantizar dicho aspecto, podrá garantizar los derechos humanos de las y los reclusos.[47] Si el estado es incapaz de mantener el orden y seguridad al interior de los centros penales, será incapaz de cumplir con el objetivo esencial de la pena privativa de libertad; la reforma y la readaptación social de las personas privadas de la libertad.

85. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que el respeto a los derechos humanos es un pilar fundamental del sistema penitenciario en México, cuya finalidad es la reeducación y reinserción social de los condenados, con base en el trabajo, la educación, la salud y el deporte.[48] En el mismo sentido, el Comité de Derechos Humanos ha establecido que las personas privadas de la libertad, gozan de todos los derechos humanos protegidos por las normas nacionales e internacionales en la materia, sin perjuicio de las restricciones inevitables en condiciones de reclusión.[49]

86. La Corte Interamericana ha señalado que, toda restricción a los derechos humanos de las personas privadas de su libertad, debe demostrar fehacientemente la necesidad de ésta y regular rigurosamente la limitación de que serán objeto. Asimismo, ha establecido que existen derechos -como la vida, la integridad, el debido proceso, entre otros-, cuya limitación o restricción está prohibida; ya que, toda persona privada de su libertad tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal y el Estado debe garantizarle el derecho a la vida y a la integridad personal. En consecuencia, el Estado como responsable de los establecimientos de detención, es el garante de estos derechos de los detenidos.[50]

87. Luego, a través del caso Instituto de Reeducación de Menor, la Corte determinó que, la garantía de esos derechos corresponde al Estado ya que la persona privada de la libertad se encuentra bajo su sujeción y la compurgación de su pena, debe limitarse a la restricción del derecho a la libertad, no anular su titularidad respecto a los diversos derechos humanos que le asisten. Es decir, al privarse de la libertad a una persona, el Estado coloca a ésta en una institucionalización total, ya que al permanecer en un centro de reclusión los diversos aspectos de su vida se someten a una regulación y control absoluto que, entre otros aspectos, disminuyen radicalmente las posibilidades de autoprotección.

88. Por otro lado, el reconocimiento de la dignidad humana inherente a toda persona, con independencia de sus condiciones particulares o situación jurídica, es una disposición universalmente aceptada en el derecho internacional. En consecuencia, instrumentos como la Declaración Americana y la Convención Americana, reconocen el derecho a la integridad personal de toda persona sujeta a la jurisdicción del Estado.[51] Al respecto el Comité de Derechos Humanos ha establecido que el trato humano y respeto de la dignidad de las personas privadas de su libertad es una norma de aplicación universal, que no depende de los recursos materiales del Estado. En el mismo sentido, los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, reconocen que todas las

---

[46] CrIDH. Caso "Instituto de Reeducación del Menor" Vs. Paraguay. Sentencia de 2 de septiembre de 2004 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), párr.152.
[47] Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe sobre los derechos humanos de las personas privadas de libertad en la Américas, aprobado el 31 de diciembre de 2011, págs. 3-6.
[48] Art. 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
[49] Comité de Derechos Humanos, Observación General no. 21 Trato humano de las personas privadas de la libertad, párr. 3.
[50] Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Neira Alegría y otros vs. Perú, Sentencia de 29 de enero de 1995, Serie C No. 20, párr. 60.
[51] Cfr. Art. XXV de la Declaración Americana de los derechos y deberes del hombre y art. 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

personas privadas de su libertad que estén sujetas a la jurisdicción del Estado deberán ser tratadas humanamente, con irrestricto respeto a su dignidad, derechos y garantías fundamentales. Dicha garantía se encuentra salvaguardada también en el Sistema Universal, a través del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que consagra de manera expresa en el artículo 10.1 el principio de trato humano como eje fundamental de las normas aplicables a las personas privadas de su libertad.

89. De lo anterior, podemos advertir que la privación de la libertad tiene como único objetivo reeducar y reinsertar socialmente a aquellas personas que han cometido un delito. Por lo cual, el Estado debe cumplir una serie de obligaciones relacionadas con su efectiva protección, a fin de que se cumplan dichos objetivos, sin que se vulneren los demás derechos humanos que éstas poseen. Sobre todo, aquellos relacionados con la salvaguarda de su vida e integridad. Por lo cual, éste tiene la obligación de protegerlos contra actos de violencia provenientes tanto de sus propios servidores, como de los demás reos.

90. La Comisión Interamericana se ha pronunciado sobre la necesidad de que los Estados ejerzan un control efectivo de los centros penitenciarios, a fin de garantizar en todo momento la seguridad de las personas privadas de la libertad, sus familiares y de los propios trabajadores que ahí laboran. Pues, cuando el Estado deja de tener un efectivo control sobre éstos, se generan situaciones que ponen en riesgo no sólo la integridad, sino la propia vida de las personas que se encuentran privadas de su libertad. Contraviniéndose así una de las principales obligaciones en materia de derechos humanos: “garantizarlos”. Asimismo, se traduce en la imposibilidad de que las penas privativas cumplan con su objetivo de reeducación y reinserción social.

91. De manera específica, la Comisión Interamericana ha señalado que la violencia carcelaria es uno de los problemas más graves que enfrentan los sistemas penitenciarios de América Latina, y comprende tanto las agresiones de los agentes del Estado contra las personas privadas de la libertad, como los actos de violencia entre personas privadas de la libertad o de éstos contra los agentes del Estado o terceras personas.[52] Situación que sólo pueden ser prevenidas a través de acciones concretas que, por un lado, corrijan las deficiencias que permiten el rearme de la población penitenciara y por el otro, permitan proveer los centros penitenciarios de personal capacitado y en número suficiente para asegurar el adecuado y efectivo control.

92. El Estado tiene la obligación de salvaguardar los derechos de las personas privadas de su libertad, sin perjuicio de las restricciones inevitables asociadas a las condiciones de reclusión; pues, al encontrarse éstas bajo su resguardo, no hay ni puede haber ninguna razón para que éste se sustraiga de su deber perentorio de salvaguardar la vida e integridad de las personas que se hallan sujetas a su control y que carecen por sí mismas de capacidad efectiva de autodeterminación y defensa.

93. La Corte ha determinado que, las medidas que el Estado debe adoptar para proteger y garantizar el derecho a la vida de las personas privadas de la libertad, abarcan desde aquéllas que favorecen la conservación de un clima de respeto a los derechos humanos hasta aquellas dirigidas a proteger a las personas privadas de la libertad de la violencia que pueda suscitarse entre ellos. Ya que, dichos actos de violencia, representan una situación de riesgo inminente tanto para la vida de las personas recluidas, como para la de cualquier persona que se encuentre en dichos establecimientos. De ahí que, el Estado deba tener la capacidad de mantener el orden y la seguridad al interior de los centros penitenciarios y así, garantizar la seguridad de las personas privadas de la libertad en todo momento, así como de las personas que los visitan y de las propias que laboran en ellos. Al respecto, la Corte Interamericana ha señalado que, atendiendo a esta obligación, el Estado no puede permitir que la seguridad y el orden de las cárceles esté en manos de los reclusos; pues se colocaría a estos en una situación

[52] Comisión Interamericana de Derechos Humanos supra nota 1, pág. 38.

de riesgo permanente, al exponerlos a la violencia y a los abusos por parte de las personas privadas de la libertad que tengan el poder al interior.[53]

94. En el mismo sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que el Estado transgrede el derecho a la vida de una persona no sólo cuando un agente estatal la priva de la vida, sino también cuando no adopta las medidas necesarias y razonables para minimizar el riesgo de que la pierda a manos de otros particulares.[54] En consecuencia, las autoridades estatales están obligadas a realizar todas aquellas acciones necesarias para preservar la vida de las personas bajo su control y custodia, así como para evitar violaciones a sus derechos humanos; ya sea por otros particulares o por servidores públicos; para así, reducir las situaciones que ponen en riesgo su vida.

95. Como se ha señalado anteriormente, el derecho a la vida y el derecho a la integridad física constituyen derechos humanos fundamentales para garantizar el ejercicio de otros derechos. Motivo por el cual, en el caso específico de las personas privadas de su libertad, el Estado adopta una posición especial de garante, que se traduce en el deber de respeto y garantía de los mismos. En ese contexto, el Sistema Interamericano precisa que, el derecho a la integridad personal se encuentra reconocido en los artículos I, XXV y XXVI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en el artículo 5 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, al establecerse que toda persona tiene derecho a que se le respete su integridad física, psíquica y moral. Asimismo, señala de manera específica que, toda persona que sea privada de su libertad gozará de un tratamiento humano durante dicha privación. La protección de este derecho es tal que, la Convención Americana establece la inderogabilidad de este derecho en caso de guerra, de peligro público o de otras emergencias que amenacen la independencia o seguridad del Estado.[55]

96. Así, podemos advertir que, en el Sistema Interamericano, del cual forma parte nuestro país, no es posible suspender el goce del derecho a la integridad personal, independientemente de sus circunstancias particulares. En este sentido, en los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, se estableció la obligación del Estado consistente en proteger a éstas contra todo tipo de amenazas, actos o conductas que tengan como finalidad anular la personalidad o disminuir la capacidad física o mental de la persona.[56] Situación que cobra especial relevancia tratándose de personas privadas de su libertad, pues su resguardo y control se encuentra completamente bajo el Estado; lo que obliga a éste a adoptar medidas concretas que garanticen de manera efectiva el ejercicio pleno de este derecho.

97. Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que la responsabilidad del Estado, respecto a garantizar el derecho a la integridad de las personas privadas de su libertad, no se circunscribe a la obligación negativa de abstenerse de infligir un daño a dichas personas; ya que, al tener éste el control sobre la vida de las y los reclusos, sus obligaciones se amplían e incluyen establecer medidas de seguridad y control necesarias para preservar la vida e integridad personal de las personas privadas de su libertad[57]. De ahí, que el Estado deba adoptar las medidas necesarias para prevenir que las personas privadas de su libertad sean atacadas por otros reclusos. Por lo cual, dichos centros deben contar con vigilancia constante y adecuada para mantener la seguridad y el control de personas privadas de la libertad.

98. De igual manera, en el Caso Tibi *vs.* Ecuador, la Corte determinó que, el Estado tiene además el deber de investigar, sancionar y reparar toda violación a este derecho cometido en perjuicio de las personas que se encuentran bajo su custodia. Por lo cual, debe de iniciar de

---

[53]Corte Interamericana de Derechos Humanos, Asunto del complejo penitenciario de Curado respecto de Brasil. Resolución de 22 de mayo de 2014, párr. 26.
[54] Tesis aislada P. LXI/2010, "Derecho a la vida. Supuestos en que se actualizará su transgresión por parte del Estado. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época, t. XXXIII, enero 2011, pág. 24.
[55]Art. 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
[56] Principio 1 de Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de la Libertad en las Américas.
[57] Comisión Interamericana de Derechos Humanos, supra nota 1, pág. 134.

oficio y de manera inmediata una investigación efectiva que permita identificar, juzgar y sancionar a los responsables de dichas agresiones.

99. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 1°, párrafos primero y tercero, establecen la obligación del Estado garante, respecto de la promoción, respecto, protección y garantía de los derechos humanos, cuando señala que "todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece."[58]Por lo que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.[59]

100. En particular, por lo que hace a las personas privadas de su libertad, el artículo 18, párrafo segundo de la Constitución Federal, establece que "el sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley."[60]En esas circunstancias, "el Estado es el garante de la seguridad de quienes se encuentren bajo su custodia en los centros penitenciarios del país."[61]

101. La Ley Nacional de Ejecución Penal, se encuentra armonizada a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales, pues establece que todas las personas privadas de su libertad, gozarán de todos los derechos previstos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, al señalar que "las personas privadas de su libertad en un Centro Penitenciario, durante la ejecución de la prisión preventiva o las sanciones penales impuestas, gozarán de todos los derechos previstos por la Constitución y los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, siempre y cuando estos no hubieren sido restringidos por la resolución o la sentencia, o su ejercicio fuese incompatible con el objeto de éstas. Para los efectos del párrafo anterior, se garantizarán, de manera enunciativa y no limitativa…" "[t]oda persona privada de la libertad tiene derecho a que se garantice su integridad moral, física, sexual y psicológica."[62]

102. En ese contexto, la autoridad penitenciaria, como representante del Estado en los centros de reclusión y detención, tiene a su cargo la administración y operación del Sistema Penitenciario, basada en el respeto a los derechos humanos, supervisando que en las instalaciones de los centros, se mantenga la seguridad, tranquilidad e integridad de las personas privadas de su libertad, según lo disponen los artículos 14, 15 fracción I, 19 fracción II, y 20 fracciones V y VII de la Ley Nacional de Ejecución Penal, "la Autoridad Penitenciaria organizará la administración y operación del Sistema Penitenciario sobre la base del respeto a los derechos humanos, el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte, como medios para procurar la reinserción de la persona sentenciada a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, y supervisará las instalaciones de los Centros Penitenciarios para mantener la seguridad, tranquilidad e integridad, de las personas privadas de la libertad, del personal y de los visitantes, ejerciendo las medidas y acciones pertinentes para el buen funcionamiento de éstas."[63]

---

[58] Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150917.pdf, fecha de consulta 21 de febrero de 2018.
[59] Ídem.
[60] Ídem.
[61]CNDH Recomendación 04/2016 de fecha 25 de febrero de 2017, párr. 29.
[62]Ley Nacional de Ejecución Penal, artículo 9.
[63]Ídem.

103. Y una de sus funciones básicas será “[g]arantizar el respeto a los derechos humanos de todas las personas que se encuentren sujetas al régimen de custodia y vigilancia en un Centro Penitenciario;”[64]. Por lo que la custodia penitenciaria será una atribución de la Autoridad Penitenciaria consistente en: “[s]alvaguardar la vida, la integridad, la seguridad y los derechos de las personas privadas de la libertad, visitantes y personal adscrito a los Centros Penitenciarios y las demás instalaciones que determinen las disposiciones aplicables; así como hacer cumplir su normatividad;”[65]. Además de [p]reservar el orden y tranquilidad en el interior de los Centros, evitando cualquier incidente o contingencia que ponga en riesgo la integridad física de las personas privadas de la libertad, visitas y personal de los mismos;”; “[s]alvaguardar la integridad de las personas y bienes en los Centros, así como garantizar, mantener y restablecer el orden y la paz en los mismos, utilizando para ello los protocolos aplicables, con apoyo en las herramientas, mecanismos y equipo necesarios disponibles para el cumplimiento de sus atribuciones; […]”[66].

104. En ese contexto, resulta pertinente analizar, si el personal de seguridad y custodia del Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas, incurrió en omisión, respeto a los derechos humanos de las personas que se encuentran privadas de su libertad; esto, en virtud a que **VD** fue agredido en diversas ocasiones, esto es el 07 de mayo y 08 de julio de 2019[67], mientras se encontraba en el área de población; así como durante su estancia en el área del OCLADE, en las siguientes fechas: el 04 de agosto de 2019[68], cuando estaba ubicado en la celda número 09 de la planta alta; 01 de septiembre de 2019[69], ubicado en la celda 01 de la planta baja; 08 de septiembre de 2019[70], en el pasillo y, finalmente el 13 de septiembre de esa anualidad, cuando al interior de la Celda 2, bloque B, planta baja perdió la vida.

105. La Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Cabrera García y Montiel Flores *Vs.* México, estableció que el Estado es responsable –en su condición de garante– de los derechos reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como de la observancia del derecho a la integridad personal de todo individuo que se encuentra bajo su custodia; de ahí que siempre que una persona sea detenida en un estado de salud normal y, posteriormente, aparezca con afectaciones a ésta, es obligación del Estado proveer una explicación creíble de esa situación.

106. En este punto, resulta importante retomar la información asentada en el recuadro inserto en el análisis anterior, en donde, entre otros temas, se precisó las fechas en las que **VD** fue agredido dentro del Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas, esto es el 07 de mayo y 08 de julio en el área de población; una vez reubicado en el OCLADE, el domingo 04 de agosto en la celda 09 de la planta alta; el 01 de septiembre en la celda 01 de la planta baja; el 08 de septiembre en el área del pasillo y, finalmente, el 13 de septiembre perdió la vida en el interior de la celda 2, bloque B, planta baja.

107. Así entonces, en la comparecencia recabada a **VD** el 13 de agosto de 2019, señaló que hacía un mes y medio había sido lesionado y torturado fuertemente por otras personas privadas de la libertad, razón por la cual fue trasladado al área de OCLADE, concretamente en la celda 09, de la parte superior, en donde también fue agredido físicamente por las personas privadas de la libertad que están en esa celda, a quienes identificó como (...), e imputó de forma directa la agredieron, así como amenaza de muerte, que posteriormente lo ubicaron en una celda de la parte inferior del OCLADE, en la marcada como número 01, en donde vivía con otras 7

---

[64]Ídem.
[65]Ídem.
[66]Ídem.
[67]Información proporcionada por el Teniente Coronel **AR2SSP,** mediante el oficio (...), suscrito el 29 de mayo de 2019, foja 50 de la carpeta administrativa (...). Así como del escrito presentado por **VD** el 03 de septiembre de 209, ante el Juez de Ejecución de Sanciones Penales.
[68]Información proporcionada por **VD** mediante escrito de 06 de agosto de 2019. Así como del informe rendido por **SP14,** Primer Comandante del Segundo Grupo de Guardia, foja 123, *ídem*.
[69]Información proporcionada el 02 de septiembre de 2019 por **VI,** y constatada por personal de este Organismo el 04 de septiembre siguiente.
[70]Información proporcionada el 09 de septiembre de 2019, por **VI,** y constatada por personal de este Organismo, el 10 de septiembre siguiente.

personas. Luego, en la comparecencia recabada el 21 del mismo mes y año, señaló que el entonces Director, tenía conocimiento de las agresiones físicas que sufría. Además, el 22 de agosto y 02 de septiembre de 2019, se recabaron comparecencias a **VI,** madre de **VD,** quien hizo del conocimiento a este Organismo de las agresiones físicas que su hijo había sufrido el 01 y 08 de septiembre, respectivamente.

108. Si bien es cierto, **VD** omitió realizar señalamiento alguno en su queja, respecto de la violencia sufrida el 07 de mayo de 2019, al expediente de queja, se anexó copia de la carpeta administrativa de ejecución (...), de la que se advierte el acta de audiencia de 08 de mayo de 2019, presidida por el Juez de Ejecución de Sanciones **SP1,** presente también el sentenciado **VD**, conjuntamente con su Defensora Pública **AR3DGDP**, en cuyo dato relevante número 7, se determinó: "ATENDIENDO A LAS MANIFESTACIONES DE LA DEFENSA Y LAS LESIONES QUE PRESENTA LA PERSONA SENTENCIADA, SE RINDA INFORME PORMENORIZADO RESPECTO DEL PORQUÉ EL SEÑOR VD ACUDE A LA AUDIENCIA CON LAS LESIONES, QUE SE NOS INFORME AL RESPECTO, SI ES QUE OCURRIÓ ALGÚN INCIDENTE Y PEDIRLE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL DEL ESTADO PARA QUE HAGA LOS REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA QUE SE LE BRINDE LA PROTECCIÓN A LA VIDA E INTEGRIDAD A LA PERSONA SENTENCIADA."

109. Derivado del requerimiento del Juez de Ejecución de Sanciones, el 20 de mayo de 2019, el entonces Director General de Prevención y Reinserción Social del Estado, **AR1SSP,** dirigió el oficio (...), al entonces Director del Centro Regional de Reinserción Social Varonil, de Cieneguillas, Zacatecas, Teniente Coronel, **AR2SSP** para que informara el motivo por el cual la persona sentenciada compareció golpeada a la audiencia. En respuesta, el 17 de junio, el Inspector hizo llegar al Juzgador, el oficio (...), al que anexó el informe rendido por el Director del Centro Penitenciario, quien refirió que el 07 de mayo anterior, el Primer Comandante de la segunda guardia **SP14,** recabó el parte informativo, en el que asentó que siendo aproximadamente las 14:40 horas, se reportó vía teléfono, por parte de un custodio que **PPL1** y **VD**, habían sido golpeados por lo que, al ser llevados a la comandancia, y cuestionarles quién había sido, ambos dijeron no haberse percatado de las personas que los golpearon.

110. De lo anterior, se dio vista el 21 de junio al Agente del Ministerio Público con sede en la comunidad de Cieneguillas, Zacatecas, para lo cual el **SP25,** solicitó al Juez de Ejecución de Sanciones, dar vista a la Dirección de Investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado, a efecto de iniciar con la carpeta de investigación, en contra de quien resulte responsable por el delito de lesiones cometido en agravio de **VD**, integrándose la carpeta única de investigación (...), del índice de la Agencia del Ministerio Público Número Dos adscrito a la Fiscalía Especializada de Derechos Humanos, Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

111. Incluso el propio sentenciado fue requerido por el Juzgador para que explicara por qué se encontraba lesionado al momento de celebrarse la audiencia el día 08 de mayo de 2019, para lo cual **VD** el 14 de junio siguiente, presentó un escrito, del que se deprende: *"Respecto a la notificación del día 13 de junio del año en curso y respecto en el fui golpeado el día 8 de mayo día en que fui a la audiencia a la sala #1 uno fue una riña entre un persona privada de la libertad y yo por lo que no ocupo medidas especiales de seguridad…"*

112. Se tiene por acreditada la agresión física advertida, si nos remitimos al informe emitido el 09 de agosto de 2019, por el Primer Comandante del Segundo Grupo de Guardia, **SP14,** en el que afirmó: *"**VD,** fue extraído del área de población, por su seguridad el día 08 de julio de 2019, para ser ubicado en el área de OCLADE, cabe mencionar que esta medida se tomó a beneficio de la propia persona privada de su libertad en mención, para poder garantizar su integridad física, en virtud que otras P.P.Ls. que habitan en el área de población, lo agredieron verbal y físicamente ya que VD es una persona conflictiva, y que en reiteradas ocasiones se le ha tenido que cambiar a diferentes módulos y áreas, y hoy en día la única área en donde puede permanecer para garantizar su seguridad es en el área de OCLADE."*

113. Respecto a la agresión del 08 de julio de 2019, existe un escrito de **VD** dirigido al Juez de Ejecución de Sanciones Penales, en el que señaló que la última golpiza fue el 08 de julio, en la cual le tumbaron un diente a causa de los golpes, por ese motivo lo trasladaron al área del OCLADE.

114. Una vez trasladado al área del OCLADE, el domingo 04 de agosto, mientras se encontraba en la celda 09 de la planta alta, fue agredido, lo que se desprende del escrito presentado al Juez de Ejecución de Sanciones el 06 de agosto de 2019, en el que **VD** señaló: *"comparezco ante usted para solicitar mi traslado al penal que sea ya que ayer domingo me golpearon nuevamente y entre las 5:00 pm y 5:30 me golpearon 5 personas privadas de la libertad dentro de la celda #9 del módulo llamado Oclade que más motivos hay claros y vistos a todas luces su señoría le suplico le pido por favor que me apoye con el traslado al penal que sea ya que en el área de población no me quieren los encargados por causa de las golpizas que me han dado sobre mi persona."*

115. Asimismo, obra el acta de visita carcelaria al justiciable, presentada ante el Juzgado de Ejecución de Sanciones, el 06 de agosto de 2019, por la **AR3DGDP,** Defensora Pública, en la cual **VD**, expresó: *"el domingo aproximadamente a las 5:00 pm y/o 5:30 los 5 compañeros de mi celda #9 del módulo Oclade me quisieron ahorcar y me les safé y fue el modo que salvé mi vida es la 5 quinta vez que pido y solicito mi traslado a CEFERESO #12 'CPS' Ocampo, Guanajuato."*

116. El 15 de agosto de 2019, el **SP1,** Juez de Ejecución de Sanciones, acordó la promoción presentada por la Defensora Pública de **VD** y ordenó dar vista a la Dirección General de Prevención y Reinserción Social del Estado, a efecto de que se resguardara la integridad física y la vida del citado sentenciado, notificado en la misma fecha. Por lo cual el 19 de agosto siguiente el **AR1SSP**, giró el oficio (...) al Teniente Coronel **AR2SSP,** Director del Centro Penitenciario, mediante el cual le instruye para que, adoptara medidas de seguridad pertinentes para salvaguardar la integridad física, psicológica y moral de **VD**.

117. Al respecto, el 21 de agosto, mediante el oficio (...) el **SP12,** en ausencia del Director del Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas, informó que, a partir del 08 de julio de esa anualidad, **VD** contaba con una medida especial de vigilancia en el área del OCLADE, en virtud de que otras personas privadas de la libertad que habitan en el área de población, lo agredieron verbal y físicamente. Además, obra la declaración rendida el 30 de agosto de 2019, por el quejoso **VD** ante personal de este Organismo, en la que expresó que el 05 de agosto lo quisieron ahorcar en la celda del OCLADE y que, aun así, continuaba en el módulo.

118. Por otro lado, el 02 de septiembre de 2019, la señora **VI**, mamá de **VD**, acudió a las instalaciones de este Organismo, para hacer del conocimiento que 01 de septiembre anterior, su hijo había sido agredido nuevamente por sus compañeros de celda, quienes le tumbaron un diente. Por lo anterior, el 04 de septiembre, se acudió al Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas, en donde el quejoso expresó que el 06 de agosto lo quisieron ahorcar, por lo cual, en esa fecha, estaba viviendo en el pasillo, porque tuvo problemas con los compañeros de celda, y el sábado anterior había sido amenazado, por lo cual lo sacaron de la celda; que el viernes tuvo un pleito con tres de sus compañeros de celda. En la citada diligencia, el personal adscrito a esta Comisión, pudo constatar que **VD** presentaba en la mano izquierda 2 puntos rojos, así como excoriación de aproximadamente 1 centímetro, en color rojizo.

119. Además, el 09 de septiembre, personal de este Organismo recabó la comparecencia de **VI1** y **VI3**, quienes hicieron del conocimiento que **VD** fue agredido, lo anterior en virtud de que el domingo 08 de septiembre **VI1** acudió a visitarlo, y pudo constatar que se encontraba lastimado del brazo derecho y del cuello, ya que presentaba cortadas en el antebrazo derecho y cuello, como tipo rasguños grandes, contabilizando 3, de aproximadamente 10 centímetros, y las lesiones del brazo se veían como cuadros. Por lo cual, el 10 de septiembre, personal adscrito a

esta Comisión, acudió a visitar a **VD** en donde expresó que lo hirieron en el brazo izquierdo, observando que presentaba heridas en el antebrazo, como si fuera un trazo.

120. Respecto de los momentos y agresiones descritas anteriormente, resultan prueba plena de la violencia física vivida en el Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas, de la cual las autoridades penitenciarias tenían pleno conocimiento incluso de que la vida de **VD** corría peligro, pues en el oficio (...), suscrito el 10 de septiembre de 2019, el Teniente Coronel **AR2SSP,** entonces Director del Centro Penitenciario informó lo siguiente: "…Por otra parte se observa en su solicitud de traslado que teme por su vida en este centro lo cual es cierto de ahí que como refiero se le ubicó en el área de OCLADE…".

121. Además, como medida de suspensión decretada en el procedimiento de protección jurisdiccional de derechos humanos, se ordenó, el cese de los actos de maltrato, tormentos y golpes, así como cualquier otro acto prohibido por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

122. Finalmente, el (...), aproximadamente a las 18:02 horas, al interior de la celda 2, del bloque B, planta baja del OCLADE, **SP3,** encargado de dicha área y la **ENFERMERA SP2**, localizaron el cuerpo sin vida de **VD**, a quien le encontraron una agujeta alrededor de su cuello y al tomarle la enfermera los signos vitales, pudo percatarse que había perdido la vida, para lo cual dieron aviso de inmediato a sus superiores, así lo confirmaron los citados servidores públicos en las comparecencias que tuvieron ante personal de este Organismo el 03 de octubre y 03 de diciembre de 2019, respectivamente, así como la comparecencia que se le recabó a **SP4,** quien es primer comandante de la primera guardia.

123. Para este Organismo queda evidenciado que no se garantizó ni se protegió el derecho a la integridad personal de **VD**, puesto que como ya se indicó existieron 5 agresiones previas a que la persona privada de la libertad perdiera la vida, esto entre el área de población y el área de Observación, Clasificación y Desintoxicación (OCLADE), pues la medida de reubicarlo de la primera a la segunda de las áreas, en nada cumplió con el objetivo de salvaguardar su integridad física, como en diversos escritos lo asentó el entonces Director del Centro Regional de Reinserción Social Varonil, Teniente Coronel **AR2SSP**.

124. Lo anterior es así pues derivado de las agresiones físicas que sufrió en el área de población el 07 de mayo y 08 de julio de 2019, fue trasladado al área de OCLADE, en donde existen diversas condiciones que lo colocaban en una situación de vulnerabilidad, tales como la sobrepoblación y hacinamiento que propician autogobierno/cogobierno, pues en la celda 09 de la planta alta, fue ubicado con otras 5 personas quienes lo golpearon, luego lo reubicaron en la celda 01 de la planta baja, en compañía de 7 personas más, generando agresiones físicas, después se toma la decisión de reubicarlo en el pasillo, en donde también fue agredido el 08 de septiembre, por lo que, en el caso de **VD** ninguna de las medidas tomadas fue eficaz para que el Sistema Penitenciario cumpliera con su calidad de garante, afectando además, como ya se dijo, los derechos al trato digno y reinserción social de **VD** como persona privada de la libertad.

125. La omisión de las autoridades penitenciarias en el caso de **VD**, no favoreció una protección efectiva de sus derechos humanos, contraviniendo lo estipulado en los artículos 1°, párrafos primero, segundo y tercero, así como 18, párrafo segundo de la Constitución Federal, pues la Corte ha dicho que "el Estado tiene el deber de adoptar las medidas necesarias para proteger y garantizar el derecho a la vida y a la integridad personal de las personas privadas de libertad y de abstenerse, bajo cualquier circunstancia, de actuar de manera tal que se vulnere la vida y la integridad de las mismas. En este sentido, las obligaciones que ineludiblemente debe asumir el Estado en su posición de garante, incluyen la adopción de las medidas que puedan favorecer al mantenimiento de un clima de respeto de los derechos humanos de las personas privadas de libertad entre sí, […], reducir el hacinamiento, procurar las condiciones de detención mínimas compatibles con su dignidad, y proveer personal capacitado y en número suficiente para asegurar el adecuado y efectivo control, custodia y vigilancia del centro penitenciario. Además,

dadas las características de los centros de detención, el Estado debe proteger a los reclusos de la violencia que, en la ausencia de control estatal, pueda ocurrir entre los privados de libertad.[71]"

126. Así también, la Corte ha señalado que, "en casos donde las víctimas alegan haber sido torturados estando bajo la custodia del Estado, éste es responsable, en su condición de garante de los derechos consagrados en la Convención, de la observancia del derecho a la integridad personal de todo individuo que se halla bajo su custodia."[72] En consecuencia, existe una presunción por la cual el Estado es responsable por las lesiones que exhibe una persona que ha estado bajo la custodia de agentes estatales. En dicho supuesto, recae en el Estado la obligación de proveer una explicación satisfactoria y convincente de lo sucedido y desvirtuar las alegaciones sobre su responsabilidad, mediante elementos probatorios adecuados.

127. Por otro lado, la Corte ha señalado que, "en casos en que una persona que ha estado bajo custodia de agentes estatales exhibe lesiones, […], corresponde al Estado proveer una explicación satisfactoria y convincente de esa situación y desvirtuar las alegaciones sobre su responsabilidad, mediante elementos probatorios adecuados. La Corte ha considerado que la falta de tal explicación conlleva la presunción de responsabilidad estatal por tales lesiones[73]. Similar criterio tomó la Corte en el caso Hermanos Landaeta Mejías y otros Vs. Venezuela, en cuya parte final del párrafo 198, señaló: "En circunstancias particulares, "la falta de tal explicación [podría llevar] a la presunción de responsabilidad estatal por las lesiones que exhibe una persona que ha estado bajo la custodia de agentes estatales".

128. En el caso concreto, al momento de solicitar el informe de autoridad, entre otras, al Director del Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas, se le corrió traslado con copia de las comparecencias de **VD** de las que se desprenden los diversos hechos motivo de su queja, entre ellos, la referencia de haber sido golpeado en diversas ocasiones por sus compañeros de celda, en ese sentido el 29 de agosto de 2019, la citada autoridad se concretó a señalar "esta autoridad desconoce el motivo por el cual fuera agredido el ahora quejoso, quien es una persona conflictiva que ha tenido problemas en toda el área de población…", sin que se anexara prueba o documento alguno.

129. Por lo que es posible concluir que, si bien no se cuenta con elementos para determinar la responsabilidad de la autoridad penitenciaria de forma directa en las agresiones descritas en líneas precedentes, también lo es que no existe una explicación clara del motivo de las lesiones presentadas el 07 de mayo, 08 de julio, 04 de agosto, 01 y 08 de septiembre de 2019, sobre el cuerpo de **VD**, por lo que esta Comisión de Derechos Humanos observa que frente a estos hechos, ni la Dirección del Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas, ni la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, brindaron una explicación sobre el origen de las mismas. Además, que frente a las evidencias y múltiples denuncias de hechos constitutivos contra la integridad personal de **VD**, dichas autoridades no realizaron investigación alguna para esclarecer los hechos y, en su caso, establecer responsabilidad de las personas involucradas.

130. Sin que se soslaye que, respecto de las lesiones que presentaba **VD**, en la audiencia celebrada el 08 de mayo de 2019, ante el Juez de Ejecución de Sanciones, fue a petición de éste que se realizó una investigación y en cuya carpeta administrativa (...), es que se rindió el informe, refiriendo que el aquí quejoso conjuntamente con PPL1, fue lesionado en el área de población y al cuestionarlos, afirmaron no haberse percatado de quién o quiénes los agredieron, tomando la decisión de reubicarlos de módulo.

---

[71] Corte IDH. Asunto del Complejo Penitenciario de Curado respecto de Brasil. Medidas Provisionales. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 22 de mayo de 2014. Párrafo 15.
[72] Corte IDH. Caso Espinoza Gonzáles Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2014. Serie C No. 289
[73] Corte IDH. Caso Isaza Uribe y otros Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2018. Serie C No. 363, párrafo 88

131. En cuanto al deber de realizar una investigación profunda, efectiva, imparcial, como un deber jurídico propio y no como una mera formalidad *condenada de antemano*, es dable decir que la misma implica la investigación de la responsabilidad penal, sin dejar de lado la responsabilidad administrativa propia del Centro Regional de Reinserción Social, pues la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que la determinación de responsabilidad penal y/o administrativa poseen, cada una, sus propias reglas sustantivas y procesales y que la falta de determinación de responsabilidad penal, en su caso, no debe impedir que se continúe con la averiguación de otros tipos de responsabilidades, tales como la administrativa[74].

132. Ahora bien, el artículo 1°, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala de manera contundente la obligación de todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, de "promover, respetar, proteger y garantizar" los derechos humanos, de conformidad con los principios de "universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad", y se establece la obligación del Estado de "prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos". Esto conlleva que todos los órganos del Estado, en el marco de las atribuciones que le son conferidas por la ley, están obligados a implementar programas tendentes a prevenir violaciones a los derechos humanos y garantizar que sean efectivamente respetados.

133. De acuerdo a lo anterior, esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, sostiene que la insuficiencia de personal de seguridad y custodia, en el Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas, es un factor preponderante, para evitar y atender hechos violentos al interior del centro penitenciario, donde en el caso de estudio, se vulneró el derecho a la integridad personal que asistía a **VD**; con lo cual, se encuentra de manifiesto, el incumplimiento a la obligación del Estado, de garantizar los derechos humanos de las personas privadas de su libertad.

134. Las personas privadas de su libertad, están sujetas a la disciplina de los centros de reinserción social, los cuales tienen el deber de respetar y garantizar los derechos humanos de éstos, atendiendo a su condición de personas privadas de la libertad. Condición que transforma ese deber en una obligación indelegable del Estado, y un requisito indispensable para cumplir con los fines de las medidas privativas de la libertad; por ello, deben ser desarrolladas en estricto apego a la Constitución Federal y a los estándares internacionales.

135. Finalmente, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se ha pronunciado reiteradamente y, de forma puntual en la recomendación general número 30/2017, haciendo énfasis en la necesidad del constante monitoreo de la seguridad y gobernabilidad de los centros penitenciarios; la ampliación del presupuesto para que sea suficiente y haga frente a las necesidades de los centros de reclusión; se incremente la plantilla del personal de seguridad y custodia y, se identifiquen a los servidores públicos que indebidamente propician o facilitan las condiciones de autogobierno y/o cogobierno y proceder contra ellos administrativa y, en su caso, penalmente.

136. En este punto, si bien es cierto el artículo 14, fracciones II y VI, de la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, permite como medidas especiales de vigilancia para personas privadas de la libertad conflictivos, el traslado a módulos especiales para su observación, así como el aislamiento temporal, también lo es que no se puede hacer un uso excesivo de tal medida, ya que en los sitios que se ocupan para tal fin, las personas privadas de la libertad no tienen acceso a los mismos servicios y derechos que el resto de la población penitenciaría, derivando en una discriminación, lo cual pueden evitar las autoridades al hacer uso de otras alternativas que les permita mantener un estrecho control de quienes puedan vulnerar la seguridad institucional, tales como la vigilancia permanente de todas las instalaciones del complejo penitenciario e incluso el traslado a otro centro de reclusión, hipótesis prevista en el mismo numeral en su fracciones V y VII, con el objeto de que su estancia transcurra en condiciones de vida digna, tal y como lo prevé el principio XXII, inciso

[74]Ibidem. Párrafo 224.

3, de los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de la Libertad en las Américas.

C) DERECHO A LA LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA

137. La seguridad jurídica "*es la certeza que debe tener el gobernado de que su persona, sus papeles, su familia, sus posesiones o sus derechos serán respetados por la autoridad, si ésta debe afectarlos, deberá ajustarse a los procedimientos previamente establecidos en las normas jurídicas",* lo anterior, de acuerdo a lo publicado por el Poder Judicial de la Federación, en conjunto con la Suprema Corte de Justicia de la Nación[75].

138. De la investigación y análisis efectuado por esta Comisión, se llegó a la conclusión que, por parte de las autoridades que conforman el Sistema Penitenciario, existieron actuaciones irregulares y fuera de la legalidad, cuestiones que no pueden ser consentidas dentro de un Estado de Derecho, pues se debe garantizar que el cuerpo normativo sea respetado a través de sus funcionarios o servidores públicos, quienes deben realizar su actuación conforme lo dispone la ley y conforme a sus atribuciones, para poder desempeñar debidamente las tareas que les son encomendadas.

139. La seguridad jurídica, materializa a su vez el principio de legalidad, el cual es un atributo que tiene toda persona a vivir dentro de un Estado de Derecho, lo que significa que, existe un ordenamiento jurídico que impone límites de las atribuciones de cada autoridad y su actuación no se debe regir de ninguna manera de forma arbitraria, sino que ésta debe circunscribirse a la disposición contenida en los artículos 14 y 16 constitucionales; entonces, la observancia de la ley se convierte en el principio básico que debe garantizar y dar certeza a la vida pública.

140. La importancia de este derecho radica además en la confianza que se deposita en las autoridades, pues las personas deben tener la tranquilidad de que la actuación de los entes públicos no es discrecional y que sus actos se ajustarán estrictamente a lo que precisan las normas concretas.

141. En relación con el derecho a la legalidad, debe decirse que se refiere a todo aquello que tiene la "*cualidad de legal*"[76]. Ahora bien, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, define a la legalidad como el principio con el que cuentan las *"autoridades del Estado para poder actuar cuando la ley se los permite, en la forma y términos que la misma determina, de tal manera que esta garantía concierne a la competencia del órgano del Estado como la suma de facultades que la ley le da para ejercer ciertas atribuciones"*[77].

142. Es evidente que existe una relación de interdependencia entre el derecho a la seguridad jurídica y el derecho a la legalidad, ya que ambos son complementarios el uno con el otro, puesto que la seguridad jurídica engloba el conocimiento de nuestros derechos y obligaciones y el derecho a la legalidad, ordena que esos derechos y obligaciones estén apegados a una norma jurídica que le permita su aplicación, por lo que no puede existir la seguridad jurídica, sin el principio de legalidad.

143. En el Sistema Universal de Derechos Humanos, el derecho a la seguridad jurídica y a la legalidad se encuentran reconocidos tanto en la Declaración Universal de Derechos Humanos[78] como en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos[79], al señalarse que ninguna persona puede ser objeto de injerencias arbitrarias en su vida, familia, derechos, posesiones, etcétera.

---

[75] *Las garantías de seguridad jurídica*. Poder Judicial de la Federación/Suprema Corte de Justicia de la Nación. 2° edición pp 11-12, México, D.F. 2005.
[76] *Las garantías de seguridad jurídica*. Poder Judicial de la Federación/Suprema Corte de Justicia de la Nación. 2° edición pp 78-79, México, D.F. 2005.
[77] Tesis Aislada num. 2a. CXCVI/2001 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala, octubre de 2001, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época.
[78] Cfr. con el contenido del artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
[79] Cfr. con el contenido de los artículos 2, 14 y 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

144. Por su parte, en el Sistema Interamericano, ambos derechos se consagran en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre[80] y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos[81], al señalarse que todas las personas tenemos derecho a la protección de la ley contra actos que tengan injerencias arbitrarias en su honra, reputación, vida privada y familiar, así como en su libertad.

145. Como se refirió anteriormente, en el sistema jurídico nacional, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consagra en sus artículos 14 y 16 el derecho a la seguridad jurídica y a la legalidad, al establecer que todos los actos de autoridad que causen molestias en las personas, así como en sus papeles o posesiones, deben de estar previstos en las leyes, es decir, deben de estar fundados y motivados, que a su vez significa contener el sustento legal y las razones que justifiquen su actuar.

146. Por su parte, nuestro Máximo Tribunal en el País, a través de su criterio orientador[82], ha dispuesto que el principio de legalidad constituye una garantía del derecho humano a la seguridad jurídica. De ahí que, aquellos, los actos realizados por las autoridades, sin estar sustentados en una norma jurídica, se considerarán arbitrarios.

> *"PRINCIPIO DE LEGALIDAD. CARACTERÍSTICAS DE SU DOBLE FUNCIONALIDAD TRATÁNDOSE DEL ACTO ADMINISTRATIVO Y SU RELACIÓN CON EL DIVERSO DE INTERDICCIÓN DE LA ARBITRARIEDAD Y EL CONTROL JURISDICCIONAL. Del artículo 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierten los requisitos de mandamiento escrito, autoridad competente y fundamentación y motivación, como garantías instrumentales que, a su vez, revelan la adopción en el régimen jurídico nacional del principio de legalidad, como una garantía del derecho humano a la seguridad jurídica, acorde al cual las autoridades sólo pueden hacer aquello para lo que expresamente les facultan las leyes, en el entendido de que éstas, a su vez, constituyen la manifestación de la voluntad general. Bajo esa premisa, el principio mencionado tiene una doble funcionalidad, particularmente tratándose del acto administrativo, pues, por un lado, impone un régimen de facultades expresas en el que todo acto de autoridad que no represente el ejercicio de una facultad expresamente conferida en la ley a quien lo emite, se considerará arbitrario y, por ello, contrario al derecho a la seguridad jurídica, lo que legitima a las personas para cuestionar la validez de un acto desajustado a las leyes, pero, por otro, bajo la adopción del mismo principio como base de todo el ordenamiento, se genera la presunción de que toda actuación de la autoridad deriva del ejercicio de una facultad que la ley le confiere, en tanto no se demuestre lo contrario, presunción de legalidad ampliamente reconocida tanto en la doctrina como en la legislación nacional. Así, el principio de legalidad, apreciado en su mayor amplitud, da cabida al diverso de interdicción de la arbitrariedad, pero también conlleva que éste opere a través de un control jurisdiccional, lo que da como resultado que no basta que el gobernado considere que determinado acto carece de fundamentación y motivación para que lo estime no obligatorio ni vinculante o lo señale como fuente de un derecho incontrovertible a una sentencia que lo anule, sino que, en todo caso, está a su cargo recurrir a los órganos de control a hacer valer la asumida ausencia o insuficiencia de fundamento legal y motivación dentro de dicho procedimiento y, a su vez, corresponderá a la autoridad demostrar que el acto cuestionado encuentra sustento en una facultad prevista por la norma, so pena de que sea declarado contrario al derecho a la seguridad jurídica, lo que revela que los procedimientos de control jurisdiccional, constituyen la última garantía de verificación del respeto al derecho a la seguridad jurídica, cuyas reglas deben ser conducentes y congruentes con ese propósito."*

147. Asimismo, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, señaló que el principio de legalidad se cumple cuando de los hechos, se permita realizar la procedencia para la aplicación de determinada norma jurídica, lo cual, legitimará el actuar de la autoridad en uno u otro sentido:

> *"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU CUMPLIMIENTO CUANDO SE TRATE DE ACTOS QUE NO TRASCIENDAN, DE MANERA INMEDIATA, LA ESFERA JURÍDICA DE*

---

[80] Cfr. con el contenido de los artículos V y IX de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.
[81] Cfr. con el contenido del artículo 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
[82] T.A. Tribunales Colegiados de Circuito, Décima época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Tomo III, Materia Constitucional, febrero de 2014.

> *LOS PARTICULARES. Tratándose de actos que no trascienden de manera inmediata la esfera jurídica de los particulares, sino que se verifican sólo en los ámbitos interno del gobierno, es decir, entre autoridades, el cumplimiento de la garantía de legalidad tiene por objeto que se respete el orden jurídico y que no se afecte la esfera de competencia que corresponda a una autoridad, por parte de otra u otras. En este supuesto, la garantía de legalidad y, concretamente, la parte relativa a la debida fundamentación y motivación, se cumple: a) Con la existencia de una norma legal que atribuya a favor de la autoridad, de manera nítida, la facultad para actuar en determinado sentido y, asimismo, mediante el despliegue de la actuación de esa misma autoridad en la forma precisa y exacta en que lo disponga la ley, es decir, ajustándose escrupulosa y cuidadosamente a la norma legal en la cual encuentra su fundamento la conducta desarrollada; y b) Con la existencia constatada de los antecedentes fácticos o circunstancias de hecho que permitan colegir con claridad que sí procedía aplicar la norma correspondiente y, consecuentemente, que justifique con plenitud el que la autoridad haya actuado en determinado sentido y no en otro. A través de la primera premisa, se dará cumplimiento a la garantía de debida fundamentación y, mediante la observancia de la segunda, a la de debida motivación."*[83]

148. Así entonces, la estructura jurídica del derecho a la legalidad implica un derecho subjetivo consistente en la satisfacción de la expectativa a no ser víctima de una inadecuada u omisa aplicación de la ley que traiga como consecuencia un perjuicio; como contrapartida, supone cumplir comportamientos obligatorios para la autoridad, sean éstos conductas de acción u omisión, y prohibir que se lleven a cabo[84].

149. La reforma a los artículos 18 y 21, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, fijó las bases para la competencia de la autoridad a la que corresponde ordenar el traslado de sentenciados en la etapa de ejecución de una sentencia penal, por lo que se introdujo el modelo penitenciario de reinserción social y la judicialización del régimen de modificación y duración de penas.

150. Así, a raíz de la citada reforma, el segundo párrafo del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: "*El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto.*"

151. En el mismo precepto constitucional, el párrafo octavo establece: *"Los sentenciados, en los casos y condiciones que establezca la ley, podrán compurgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio, a fin de propiciar su reintegración a la comunidad como forma de reinserción social. Esta disposición no aplicará en caso de delincuencia organizada y respecto de otras personas privadas de la libertad que requieran medidas especiales de seguridad."*

152. De lo anterior se puede claramente colegir que el sistema penitenciario mexicano se encuentra sustentado sobre la base del respeto a los derechos humanos, con la finalidad de reinsertar a las personas privadas de su libertad a la sociedad, quienes deberán cumplir sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio, para conseguir la citada finalidad. Así también la parte *in fine* del transcrito párrafo octavo, prevé dos excepciones, en tratándose de la delincuencia organizada y de personas privadas de la libertad que requieran medidas especiales de seguridad.

153. Por su parte el párrafo tercero del artículo 21 Constitucional señala *"La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial."* Por lo que es claro que corresponde en exclusiva al Poder Judicial la imposición de las penas, así como su

---

83Localización: [J]; 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XI, Abril de 2000; Pág. 813. P./J. 50/2000.
84 Comisión de Derechos Humanos del Estado de Jalisco, Recomendación 25/2016, 27 de julio de 2016, pags. 28,29

modificación y duración, en la inteligencia de que entre las determinaciones relacionadas con la modificación se encuentran las relativas al traslado de los sentenciados.

154. Corolario de lo anterior es que se evidencia un cambio sustancial, en el sentido de que, actualmente, no corresponde a las autoridades administrativas supervisar los medios utilizados para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y los eventos acontecidos durante el cumplimiento de las sentencias, como el traslado de personas privadas de la libertad, que corresponde a las autoridades judiciales.

155. Ahora, si bien es cierto, el artículo 18 constitucional, como ya se dijo, prevé dos excepciones a la regla del espíritu de la reinserción social:

- ✓ En tratándose de la delincuencia organizada; e
- ✓ Personas privadas de la libertad que requieran medidas especiales de seguridad

156. En este punto, resulta necesario precisar que **VD** fue sentenciado el 23 de agosto de 2013, dentro del proceso penal […] del índice del Juzgado Segundo del Ramo Penal del Distrito Judicial de la Capital y confirmada mediante el Toca Penal […], por la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, motivo por el cual, atendiendo al contenido del párrafo segundo del artículo Tercero transitorio[85] de la Ley Nacional de Ejecución Penal, la ley que le aplicaba en la ejecución de su sentencia era la Ley del Sistema Penitenciario y de Ejecución de Sanciones del Estado de Zacatecas.

157. En la citada legislación zacatecana, el artículo 91 establece que “el traslado de las personas privadas de la libertad a otros Centros o Establecimientos Penitenciarios corresponde a la Dirección General, previa autorización de la autoridad judicial correspondiente. Los traslados se efectuarán de forma que se respeten la dignidad y los derechos de las personas privadas de la libertad y la seguridad de la conducción. Toda persona privada de la libertad tiene derecho a comunicar inmediatamente a su familia y defensor, su traslado a otro establecimiento en el momento de ingresar en el mismo.”

158. Luego, el artículo 92, señala que “para resolver la solicitud de traslado, el Juez de Ejecución deberá tomar en cuenta lo siguiente:

> I. Si el traslado es solicitado por el sentenciado, tomará en cuenta los motivos que el personal privado de la libertad invoque, así como las condiciones generales del establecimiento al que se pretenda trasladar;
> II. Si el traslado es solicitado por la Dirección General o por alguna autoridad de otra entidad federativa, tomará en cuenta la necesidad del personal privado de la libertad de estar privado de su libertad en lugares próximos o cercanos a su familia, a su comunidad, al defensor o representante legal y la necesidad de la Dirección General o de la autoridad de realizar el traslado, y
> III. En casos urgentes, la Dirección General realizará el traslado del sentenciado aún sin el consentimiento de la persona privada de la libertad, debiendo mediar una razón concreta y grave que lo justifique, debiendo notificar al Juez de Ejecución al siguiente día hábil.

159. Por su parte el numeral 93 indica que “el Juez de Ejecución deberá cerciorarse que los traslados no se practiquen con la intención de castigar, reprimir o discriminar a las personas privada de la libertad, a sus familiares o representantes; ni que se realicen en condiciones que les ocasionen sufrimientos físicos o mentales, en forma humillante o que propicien la exhibición pública.”

160. Por lo que hace al Título Segundo denominado, de las autoridades relacionadas con la aplicación de la ley, el capítulo I, está dirigido al Juez de Ejecución, que comprende los artículos 118, 119 y 120; el capítulo II, dirigido a la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, los ordinales del 121 al 127; y, el capítulo tercero, denominado autoridades auxiliares, en

---

[85] Tercero. A partir de la entrada en vigor de la presente Ley, quedarán abrogadas la Ley que Establece las Normas Mínimas Sobre Readaptación Social de Sentenciados y las que regulan la ejecución de sanciones penales en las entidades federativas.
Los procedimientos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente ordenamiento, continuarán con su sustanciación de conformidad con la legislación aplicable al inicio de los mismos, debiendo aplicar los mecanismos de control jurisdiccional previstos en la presente Ley, de acuerdo con el principio pro persona establecido en el artículo 1o. Constitucional (...)

el numeral 128, en la fracción VIII, se prevé al Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Zacatecas.

161. En ese orden, el Juez de Ejecución vigilará el respeto a las finalidades constitucionales y legales de la sanción y de las medidas de seguridad, para lo cual, podrá hacer comparecer ante sí a los sentenciados o a los servidores públicos del Sistema, con fines de vigilancia y control de la ejecución. Además, tendrá las facultades y obligaciones siguientes:

I. Controlar que la ejecución de toda sanción o medida de seguridad se realice de conformidad con la sentencia irrevocable que la impuso, garantizando la legalidad y demás derechos y garantías que asisten al sentenciado durante la ejecución de las mismas;
II. Mantener, sustituir, suspender, modificar, revocar o hacer cesar la sanción y las medidas de seguridad, así como las condiciones de su cumplimiento, en los términos de la presente Ley;
III. Vigilar el cumplimiento de las sentencias que concedan sustitutivos penales o la suspensión condicional de la condena;
IV. Vigilar el cumplimiento de las medidas de seguridad impuestas a inimputables;
V. Librar las órdenes de aprehensión que procedan en ejecución de sentencia;
VI. Declarar la extinción de la sanción o medida de seguridad cuando proceda;
VII. Visitar los Centros con el fin de constatar el respeto de los derechos humanos y penitenciarios de [las personas privadas] de la libertad
s y proponer las medidas correctivas que estime convenientes dándoles el seguimiento correspondiente;
VIII. Solicitar información sobre el Programa de Reinserción Social aplicado a las persona privadas de la libertad;
IX. Resolver el otorgamiento o denegación de cualquier beneficio relacionado con las penas o medidas de seguridad impuestas en la sentencia definitiva;
X. Vigilar el cumplimiento de las sanciones distintas a la privativa de libertad;
XI. Resolver las peticiones o quejas que las personas privadas de la libertads formulen en relación con el régimen o el tratamiento penitenciario, en cuanto afecten sus derechos y beneficios;
XII. Atender las quejas que formulen las personas privadas de la libertad sobre medidas disciplinarias o medidas especiales de vigilancia, previo informe de la autoridad responsable, modificar las mismas y formular, en su caso, las recomendaciones que estime convenientes;
XIII. Resolver, en audiencia oral, todas las peticiones o planteamientos de las partes, relativos a la revocación de cualquier beneficio o sustitutivo concedido a los sentenciados por la autoridad judicial competente, y en aquellos casos en que deba resolverse sobre los beneficios de libertad anticipada o respecto a la libertad definitiva y todas aquellas peticiones que por su naturaleza o importancia requieran debate o producción de prueba;
XIV. Decretar como medidas de seguridad, la custodia de la persona privada de la libertad que padezca enfermedad mental de tipo crónico e irreversible a cargo de una institución del sector salud, representante legal o tutor, para que se le brinde atención, trato y tratamiento de tipo asilar;
XV. Resolver las peticiones de traslado que formule la Dirección, las personas privadas de la libertado autoridades de otras entidades federativas;
XVI. Aplicar una ley más benigna o la jurisprudencia que favorezca al sentenciado;
XVII. Sustanciar el procedimiento para el cumplimiento del pago de la reparación del daño;
XVIII. Garantizar a los sentenciados su defensa en el procedimiento de ejecución;
XIX. Autorizar o negar la salida temporal de las personas privadas de la libertad por causas de nacimiento, fallecimiento o enfermedad grave de padres o hijos; para recibir atención médica especializada, cuando el propio Centro no se la pueda proporcionar en cantidad y calidad;
XX. Conocer los incidentes que surjan con motivo de la ejecución de las sanciones, y
XXI. Las demás que esta Ley y otros ordenamientos establezcan.

162. Además, las decisiones inherentes a la ejecución de las sanciones y medidas de seguridad, partirán de la información técnico jurídica que proporcione la Dirección General; informes que se regirán por los principios de especialidad y objetividad.

163. Por lo que corresponde a la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, la responsabilidad de la ejecución, coordinación y vigilancia, en su caso, de las sanciones en los términos que establezca esta Ley y demás disposiciones aplicables, y le corresponde:

I. En materia de sanciones y medidas de seguridad:
a) Ejecutar la sanción de prisión, sus modalidades y las resoluciones del Juez de Ejecución que de ellas deriven;

b) Coordinar y vigilar la ejecución de las sanciones y medidas de seguridad dispuestas de la presente Ley, y

c) Proponer al Juez de Ejecución, el otorgamiento de beneficios previstos por la Ley, con el auxilio de los Consejos de cada Centro, en los términos de esta Ley y demás disposiciones aplicables.

II. Dentro del Sistema:

a) Adoptar las medidas convenientes para la prevención del delito orientadas a que las personas privadas de la libertadno reincidan en la comisión de conductas delictivas, coadyuvando con las demás Instituciones Públicas afines a la Política Criminológica;

b) Elaborar y ejecutar los planes y programas relacionados con el Sistema;

c) Integrar, planear, organizar, administrar, coordinar y dirigir, previo acuerdo con el Secretario, la política penitenciaria de la entidad por medio del sistema integral de reclusión readaptación, reinserción y reintegración social;

d) Implementar medidas para mejorar el funcionamiento administrativo y técnico de los Centros de Reinserción Social, así como para atender las necesidades de las personas privadas de la libertady las sugerencias o quejas de sus familiares o defensores;

e) Proponer al Ejecutivo del Estado criterios generales, reglamentos interiores de los Centros, normas administrativas y técnicas de los Centros con estricto apego al principio de no discriminación y vigilar su exacta aplicación;

f) Intercambiar, trasladar, custodiar, vigilar y brindar tratamiento a toda persona que fuere privada de su libertad por orden de los tribunales del Estado o de la autoridad competente, desde el momento de su ingreso a cualquier Centro o establecimiento penitenciario;

g) Supervisar la aplicación del Programa de Reinserción Social en todas sus etapas que se brinde a las personas internas;

h) Asistir a las personas liberadas, organizando patronatos, fomentando la formación de cooperativas, fideicomisos u otros entes similares y celebrando convenios de coordinación con instituciones de los distintos órdenes de gobierno o de la sociedad civil;

i) Llevar estadísticas para determinar los factores criminógenos con fines de prevención social en el Estado, y

j) Las demás que se establezcan en esta Ley y otras disposiciones legales y normativas.

164. La comunicación entre la autoridad judicial competente y aquellas que auxilien en la ejecución de las sanciones y medidas de seguridad, se llevará a cabo por conducto de la Dirección General, salvo disposición en contrario.

165. Finalmente, por lo que hace al Instituto de la Defensoría Pública, como autoridad auxiliar, corresponde:

I. Coadyuvar en la ejecución de las sanciones y medidas de seguridad en la forma y términos previstos por esta Ley, y de acuerdo a la naturaleza y modalidades específicas de las mismas;

II. Establecer conjuntamente con la Dirección General, programas y protocolos orientados a la eficacia y cumplimiento de las sanciones y medidas de seguridad a su cargo;

III. Determinar, con base en un dictamen técnico debidamente justificado, sobre la conveniencia de mantener, revisar, sustituir, modificar o hacer cesar la sanción o medida de seguridad vigilada, y

IV. Informar al Juez de Ejecución y a la Dirección General, en su caso, sobre el cumplimiento, incumplimiento o cualquier irregularidad detectada.

166. Por cuanto hace a la defensa del sentenciado, el ordinal 8, de la Ley en comento, establece que éste podrá ejercer, durante la ejecución de las medidas de seguridad o sanciones impuestas, los derechos que los instrumentos legales le otorguen, con las excepciones que se establecen en esa Ley, y planteará personalmente, por medio de su defensor o de cualquier persona en quien él delegue su representación, ante el Juez de Ejecución que corresponda, las observaciones que, con fundamento en aquellas reglas, estime convenientes. Luego, el artículo 23, establece que el ejercicio de la defensa consistirá en el asesoramiento técnico jurídico en la realización de cualquier trámite relacionado con el régimen disciplinario o con la ejecución de la sanción, cuando se requiera, así como para la interposición de las gestiones necesarias en resguardo de sus derechos, siendo su presencia obligada en todas las audiencias públicas a las que deba concurrir el sentenciado.

167. Por otro lado, en la sección tercera de la Ley del Sistema Penitenciario y de Ejecución de Sanciones del Estado de Zacatecas, cuyo título es los incidentes, el artículo 141, establece que se plantearán incidentes para resolver:

> I. Cuestiones relacionadas con la reparación del daño, promovidas por el Ministerio Público o la víctima, y
> II. Cuestiones que de alguna forma beneficien la situación jurídica del sentenciado y que no se refieran a las previstas en el artículo 119 fracción XIII de esta Ley, promovida por éste o su defensor o a solicitud de la Dirección General.

168. Mientras que el ordinal 142, determina que con el auto que admita el incidente, el Juez de Ejecución dará vista del planteamiento a las otras partes por el término de tres días hábiles comunes, y citará a una audiencia incidental a celebrarse dentro de los quince días hábiles siguientes. Se notificará a los intervinientes, al menos con tres días hábiles de anticipación a la celebración de la audiencia.

169. Una vez delimitado el orden jurídico aplicable, así como las funciones y obligaciones que en materia de traslado tienen las autoridades de quienes en vida se quejó **VD,** se realizará el análisis de forma individual, lo que se hace a continuación:

> **a)** Por lo que hace a la responsabilidad en que incurrió la Defensora Pública **AR3DGDP,** adscrita al Instituto de la Defensoría Pública:

170. Acorde a las funciones establecidas para sí en el artículo 129, de la Ley del Sistema Penitenciario y de Ejecución de Sanciones del Estado de Zacatecas, de manera general establece para las autoridades auxiliares, la coadyuvancia en la ejecución de las sanciones y medidas de seguridad e Informar al Juez de Ejecución y a la Dirección General, en su caso, sobre el cumplimiento, incumplimiento o cualquier irregularidad detectada.

171. En este punto, resulta necesario señalar cuáles son las obligaciones que tienen las y los defensores públicos en materia de ejecución de sanciones, mismas que se enuncian en el artículo 39 de la Ley del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Zacatecas[86], siendo las siguientes:

> I. Asumir la defensa del sentenciado a partir del momento en que sea designado por el Instituto, durante la ejecución de la sanción, ante el Juez o la Administración Penitenciaria, **para lo cual realizará todas las gestiones necesarias con el fin de que se respeten los derechos fundamentales del sentenciado**;
> II. Orientar jurídicamente a los familiares directos del sentenciado;
> III. **Gestionar y vigilar que se aplique la atención técnica interdisciplinaria adecuada para lograr la reinserción social del sentenciado**;
> IV. Solicitar la concesión de beneficios de libertad anticipada, tales como remisión parcial de la pena, libertad condicional, prelibertad e indulto;
> V. Solicitar la sustitución del pago de la multa por jornadas de trabajo voluntario;
> VI. Solicitar se decrete el cumplimiento de las sanciones tanto privativas de libertad como pecuniarias;
> VII. Asistir a las audiencias de informe de avances o retrocesos en el tratamiento de reinserción social aplicado a la persona privada de la libertad;
> **VIII. Solicitar el traslado del sentenciado a otro centro de reclusión que facilite su reinserción social**;
> IX. Visitar periódicamente a los sentenciados en su centro de reclusión a fin de dar asesoramiento jurídico y plantear estrategias sobre la ejecución de las sanciones impuestas; y
> IX (SIC). Las demás que le confieran esta Ley, el Estatuto Orgánico y otros ordenamientos legales aplicables.

172. Con las bases legales asentadas, es posible determinar que **AR3DGDP,** no asumió la defensa pública de **VD**, pues mientras fue su Defensora Pública, desatendió el marco legal que le regía, como se advierte con el desarrollo de los razonamientos siguientes:

---

[86] vigente mientras que **AR3DGDP** era la defensora pública de **VD**

173. La ley que regía la ejecución de la sanción impuesta a **VD** era la Ley del Sistema Penitenciario y Ejecución de Sanciones del Estado de Zacatecas y ésta, en su artículo 92 establecía que, la solicitud de traslado de los internos a otros Centros o Establecimientos Penitenciarios, sería resuelta por el Juez de Ejecución, quien debía tomar en cuenta tres hipótesis, es decir, si el traslado era solicitado por el sentenciado, debía tomar en cuenta los motivos que el interno haya invocado, así como las condiciones generales del establecimiento al que se pretendía trasladar; si el traslado era solicitado por la Dirección General o por alguna autoridad de otra entidad federativa, debería tomar en cuenta la necesidad del interno de estar privado de su libertad en lugares próximos o cercanos a su familia, a su comunidad, al defensor o representante legal y la necesidad de la Dirección General o de la autoridad de realizar el traslado; y en casos urgentes, la Dirección General podía realizar el traslado del sentenciado aún sin el consentimiento de éste, siempre que mediara una razón concreta y grave que lo justificara, determinación que debía ser notificada al Juez de Ejecución al siguiente día hábil.

174. En un análisis global de los ordinales 91, 92, 119, fracción XV, relacionados con el 141 y 142 de la Ley del Sistema Penitenciario y de Ejecución de Sanciones del Estado de Zacatecas, para realizar el traslado de personas privadas de la libertad, se podía hacer mediante tres vías, la primera, cuando la Dirección General de Prevención y Reinserción Social del Estado, previa autorización de la autoridad judicial correspondiente; la segunda a través de un incidente planteado ante el Juez de Ejecución de Sanciones Penales, ya fuera por el sentenciado, por sí o a través de su Defensa Pública, y la tercera en casos de urgencia sin que mediara el consentimiento del sentenciado, siempre y cuando este acto estuviera debidamente fundado y motivado y el Juez de Ejecución fuera notificado al siguiente día hábil después de la ejecución del traslado.

175. Concatenado lo anterior, queda claro que, al haber asumido la defensa pública en materia de ejecución de sanciones, la **AR3DGDP**, estaba constreñida a realizar todas las gestiones necesarias con el fin de que le fueran respetados los derechos fundamentales del sentenciado **VD**. Entre ellas, debió, por un lado, haber agotado la vía incidental a fin de que **VD** fuera trasladado del Centro Regional de Reinserción Social de Cieneguillas, Zacatecas, a otro centro penitenciario. Por otro lado, debió realizar cuanta gestión estuviera a su alcance para que su defenso tuviera la atención técnica interdisciplinaria adecuada para que lograra la reinserción social; sin embargo, fue omisa en ambas obligaciones que tenía para con **VD**.

176. Lo anterior se considera de esa manera, pues existen en el expediente de queja que ahora se resuelve, pruebas plenas con las cuales se acredita que **VD** en diversas ocasiones manifestó ser agredido en su integridad física, incluso, temer por su vida de lo cual la **AR3DGDP**, siempre tuvo conocimiento, ya fuera por el propio sentenciado o por el Juez de Ejecución de Sanciones, el **SP1**, quien además, señaló en su informe que, en audiencia celebrara el 08 de mayo de 2019, vio que **VD** se encontraba lesionado, por lo cual le cuestionó el motivo, ante lo cual el sentenciado guardó silencio. Luego la defensora pública se concretó a solicitar que se investigara qué había ocurrido. Así como que por esta causa el Juzgador remitió oficio a la Dirección General de Prevención y Reinserción Social para que fuera informado de lo ocurrido, además de ordenar fuera resguardada la integridad física de **VD**.

177. El Juez de Ejecución también informó que **VD** por sí o por conducto de su defensora pública en materia de ejecución, había presentado sendos escritos a través de los cuales solicitaba el traslado de centro penitenciario, manifestado ser agredido en su integridad física. Pero que, también presentaba escritos por sí o por conducto de su defensora, en el sentido de solicitar continuar viviendo en el área de población del Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas, además de exponer que no le eran necesarias medidas especiales de vigilancia.

178. Así las cosas, se advierte que el 20 de mayo de 2019, el **SP1**, Juez de Ejecución de Sanciones, suscribió el oficio (...), dirigido al Inspector **AR1SSP**, entonces Director General de Prevención y Reinserción Social del Estado, a quien requirió informe del porqué **VD** presentaba lesiones el día 08 de mayo de 2019. De lo anterior, fueron notificados tanto la Defensora

pública, como el sentenciado, el 13 de junio de 2019. Por lo cual, el 14 de junio de 2019, **VD** presentó un manuscrito, mediante el cual informó al Juez de Ejecución de Sanciones que el 08 de mayo de esa anualidad, fue agredido en una riña en la que participaron él y otra persona privada de la libertad, por lo cual no requería medidas especiales de seguridad, y solicitó se le permitiera continuar en el área de población.

179. El referido escrito fue acordado en la misma fecha de presentación por el **SP1**, Juez de Ejecución de Sanciones, en el sentido de que se le diera vista a la defensa pública con copia del escrito, a fin de que tuviera a bien concretar alguna otra solicitud y ejerciera en favor del sentenciado una defensa técnica y adecuada. Lo cual fue notificado a la Defensora Pública el 19 de junio siguiente, por lo que el 21 de junio la **AR3DGDP,** evacuó la vista y lejos de concretar alguna solicitud, como era la de traslado, expresó que **VD** solicitaba continuar viviendo en población del Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas, además de no necesitar medidas especiales de vigilancia. Por lo cual, al momento de acordar el escrito presentado por la Defensora Pública, el Juez de Ejecución de Sanciones hizo hincapié en que la defensa no realizó petición alguna, por tanto, no había nada qué acordar.

180. Luego, el 10 de julio de 2019, **VD** nuevamente presentó escrito, mismo que dirigió al Juez de Ejecución de Sanciones, solicitando su traslado al penal más cercano a su familia, con la finalidad de salvaguardar su integridad física, pues había tenido problemas en su contra y temía por su integridad física. Por otro lado, se advierte que, desde el 08 de julio de 2019, **VD** había presentado un escrito similar a la Dirección del Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas, solicitando su traslado por las mismas causas, refiriendo el temor que tenía por su integridad física. Con ambos escritos el Juez de Ejecución dio vista a la Defensora, en donde expresamente estableció *"se reserva su acuerdo con la finalidad de dar vista a la Defensa Pública con el mismo para que tenga a bien concretar la* ***SOLICITUD DE TRASLADO,*** *y con ello se ejerza en favor del antes referido una Defensa Técnica y Adecuada"*, otorgando un plazo de 48 horas para su cumplimiento; además, requirió a las Direcciones General de Prevención y Reinserción Social del Estado y del centro penitenciario, resguardaran la integridad física del sentenciado, por temer por su seguridad. La Defensora Pública fue notificada del acuerdo emitido por el Juzgador el mismo 10 de julio de 2019, a las seis horas (sic) y el sentenciado a las 13:30 horas del 11 de julio siguiente.

181. Mediante escrito presentado ante el Juez de Ejecución de Sanciones, el 12 de julio de 2019, la defensora pública, **AR3DGDP** expuso lo siguiente:

> Por medio del presente ocurso comparezco para cumplir con el requerimiento que se me realizara mediante llamada telefónica a las 18:00 del día miércoles 10 de julio del 2019, por lo que le informo el día 11 de julio a entrevistarse con el sentenciado **VD** quien ratificó su escrito en virtud de que fue agredido en el área de población, por lo que fue trasladado al OCLADE lugar en el que aparte de estar acinado no cuenta con los medios para su reinserción, solicitando su traslado a cualquier Establecimiento Penitenciario a excepción de Fresnillo, Zacatecas; por lo que al conocer del trámite para un traslado se le pidieron pruebas, al sentenciado, mismas con las que no se cuentan, porque sus familiares, como obra en autos de la misma carpeta judicial son originarios y vecinos de esta ciudad capital, así mismo sobre las amenazas es muy difícil ya que a pesar de que existan testigos, estos no querrán proporcionar su testimonio por temor a represarías, lo que le ocurrió al mismo VD al preguntarle en la audiencia pública de fecha 8 de mayo en la que asistió golpeado, y al cuestionarlo prefirió guardar silencio; así mismo en el debate de traslado el Juez tendrá que tomar en cuenta todas las pruebas que se le oferten, y por el momento esta Defensa solo cuenta como prueba con el dicho del sentenciado, ya que son partes procesales, la Fiscalía y la Dirección de Prevención, quienes podrán manifestar lo que consideren conveniente, por Io que viendo la urgencia del sentenciado, la desesperación que manifiesta el señor **VD** esta defensa le solicitó a la Dirección un posible traslado voluntario a cualquier establecimiento, y estoy en espera de la respuesta de la Dirección.

182. Al anterior escrito, adjuntó copia de la visita carcelaria que efectuó el 11 de julio de 2019, al sentenciado **VD**, en donde se puede apreciar que la **AR3DGDP**, en lugar de atender la petición de su defenso, le informó lo siguiente:

> Le informo que para un traslado es necesario requisitos, ya que así lo establece la Ley y él no cuenta con los mismos, me dice estar desesperado, pero le informó que es muy difícil un traslado debido a su fuga y él insiste en que su vida corre peligro y que el Oclade no le ofrece ningún medio para su reinserción social.
> Una vez que me ha informado, en uso de la voz en este momento manifiesto: Pido me traslado para salvaguardar la integridad física ya que corre peligro mi vida y en el área que me encuentro no hay áreas de reinserción nada más que no sea el traslado al Cereso de Fresnillo no porque ahí que ahí hay internos en el Cereso de Fresnillo hay reos de Cieneguillas y no quiero tener problemas ya que solicito mi traslado a la brevedad posible.

183. Las transcripciones precedentes, evidencian que la Defensora Pública no atendió el requerimiento efectuado por el Juez de Ejecución de Sanciones, en el sentido de que concretara la solicitud de traslado y con ello ejerciera en favor de **VD** una defensa técnica y adecuada; por el contrario, se abocó a realizar una serie de argumentos a través de los cuales ella misma afirmaba no contar con los requisitos para el traslado, argumentando conocer los requisitos para el trámite, entre ellos, las pruebas y afirmó que el sentenciado no contaba con ellas; además de que sus familiares habitan en la ciudad de Zacatecas; y que, por lo que hace a las amenazas afirmó sería muy difícil acreditarlas ya que, por ese momento, solo contaba con el dicho del sentenciado; particularmente de la hoja de visita carcelaria se desprende que la defensora pública le informó a **VD**, cuán difícil sería solicitar su traslado, debido a su fuga.

184. En ese sentido resulta preocupante el hecho de que, contrario a lo requerido por el Juez de Ejecución de Sanciones, para que la **AR3DGDP** formulara el incidente de traslado, ésta se concretó a exponer una serie de obstáculos subjetivos que van en contra de su deber de asumir la defensa del sentenciado, ante el Juez, debiendo realizar todas las gestiones necesarias con el fin de que se respeten los derechos fundamentales del sentenciado. Todo esto aún y cuando ella misma le refirió al Juez de Ejecución de Sanciones haber encontrado a **VD** muy desesperado y que le manifestó que su vida corría peligro; además, que en el área del OCLADE no le ofrecían ningún medio para su reinserción social, incluso, que en esa visita carcelaria, el sentenciado ratificó a su defensora la petición para que ésta tramitara su traslado, es decir, de alguna manera **VD** le estaba pidiendo que asumiera sus funciones y actuara de conformidad con la defensa técnica y adecuada a la cual tenía derecho.

185. En ese sentido, el deber que tenía la **AR3DGDP** como Defensora Pública en materia de ejecución de sanciones de **VD** era atender su petición y formular el incidente de traslado, mismo que debía ser presentado ante el Juez de Ejecución de Sanciones, para que éste, atendiendo a los principios legales que establecía la Ley del Sistema Penitenciario y de Ejecución de Sanciones del Estado de Zacatecas, resolviera lo que en derecho correspondiera. Pero, por el contrario, ella misma plasmaba argumentos contrarios a una defensa técnica y adecuada, al hacer valer argumentos contrarios a una incidencia de traslado, tales como una anterior fuga de **VD**, el lugar de residencia de sus familiares, la aparente falta de pruebas, todo ello más como limitante para el traslado, por lo que, este Organismo considera que fue ella quien pretendió constituirse como parte y como juez, ya que al no presentar el incidente de traslado como lo marcaba la ley en cita, no permitió que fuera el Juzgador quien determinara la existencia de elementos suficientes para el traslado, pues solo a él le correspondía tal facultad.

186. Esta Comisión advierte que, además la Defensora Pública no hizo valer las condiciones en las que se encontraba **VD** pues en múltiples escritos éste refirió que no se cumplían las obligaciones constitucionales en materia de reinserción social, como son el respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograrla, pues del escrito que adjuntó la defensora pública, mismo que suscribió el sentenciado se desprende que él informó que en el dormitorio en el que se encontraba no había actividades.

187. El escrito y anexos, exhibidos el 12 de julio de 2019, por la Defensora Pública, fueron acordados por el Juez de Ejecución de Sanciones, en esa misma fecha, en cuyo acuerdo el Juzgador insistió en que quedaba en espera de atender alguna posible solicitud de traslado, por la Defensa y el Sentenciado, precisando que debían ser sabedores que para la autorización de ese trámite debían colmarse los requisitos que marca la Ley del Sistema Penitenciario y de Ejecución de Sanciones del Estado de Zacatecas.

188. Después, el 06 de agosto de 2019, **VD** suscribió una segunda petición de traslado, la cual dirigió al Juez de Ejecución de Sanciones, en la que escribió *"comparezco ante usted para solicitar mi traslado al penal que sea ya que ayer domingo me golpearon nuevamente y entre las 5:00 pm y 5:30 me golpearon 5 personas privadas de la libertad dentro de la celda #9 del módulo llamado OCLADE que más motivos ay claros y vistos a todas luces su señoría le suplico le pido por favor que me apoye con el traslado al penal que sea ya que en el área de población no me quieren los encargados por causas de las golpizas que me han dado sobre mi persona."*. Escrito que fue acordado en esa misma fecha, advirtiendo al sentenciado que esa solicitud ya se encontraba siendo atendida por su Defensora Pública, con quien debía tener comunicación, y estarse a lo acordado el 12 de julio de esa anualidad.

189. Una tercera solicitud de traslado suscrita por **VD**, fue la que presentó su Defensora Pública el 15 de agosto de 2019, en la que expone haber acudido a entablar conversación con el sentenciado, quien le manifestó que lo trasladaran aunque fuera a un centro federal, por lo cual emitió un recordatorio a la Dirección General de Prevención y Reinserción Social del Estado, sobre la solicitud de traslado. Al citado escrito anexó copia de la visita carcelaria al justiciable de 06 de agosto anterior, en la que el sentenciado asentó: *"el domingo aproximadamente a las 5:00 pm y/o 5:30 los 5 compañeros de mi celda #9 del módulo OCLADE me quisieron ahorcar y me les safé (sic) y fue el modo que salvé mi vida es la 5 quinta vez que pido y solicito mi traslado a CEFERESO #12 'CPS' Ocampo Guanajuato"*. Sin embargo, a esta solicitud efectuada por su defenso **VD** tampoco planteó en la vía incidental su traslado a otro centro penitenciario, ya fuera uno federal como lo solicitaba el sentenciado.

190. La señalada solicitud fue acordada por el Juez de Ejecución de Sanciones el 15 de agosto, en el cual hizo del conocimiento al sentenciado que, si bien es cierto, el Juez de Ejecución de Sanciones Penales es quien autoriza los traslados de una persona sentenciada a diverso Centro Penitenciario, **ésta debe llevarse a cabo como consecuencia del trámite de una incidencia**, en el cual **ni la Defensora** ni la Dirección de Prevención, **la habían promovido,** pues eso escapaba a las funciones y facultades del juzgador.

191. El 28 de agosto de 2019, la Defensora Pública **AR3DGDP** presentó un escrito ante el Juzgado de Ejecución de Sanciones, mediante el cual hizo del conocimiento haber acudido a entablar plática con el sentenciado **VD** a quien le informó que para su traslado se hacía necesario que él rindiera su testimonio, ante lo cual el sentenciado manifestó que por el momento no era su deseo trasladarse y que prefería continuar compurgando la pena en el Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas, para lo cual adjuntó el manuscrito elaborado y firmado por el sentenciado **VD**, en el que asentó: *"Deseo aclarar que me desisto a cualquier traslado quiero y deseo seguir compurgando mi condena en el Centro de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas Zacatecas"*.

192. Sin embargo, atendiendo a la manifestación del sentenciado **VD**, respecto a desistirse de ser trasladado, el 30 de agosto de 2019, personal adscrito a este Organismo se constituyó en el Centro Penitenciario de Cieneguillas, Zacatecas, y pudo corroborar que **VD** afirmó que él no se había desistido de su solicitud de traslado, refiriendo que él no había firmado documento alguno y que por el contrario, llevaba desde el mes de febrero solicitándole a su defensora que promoviera su traslado, pero que no le ayudó en nada.

193. Luego, el 03 de septiembre de 2019, el **SP1,** Juez de Ejecución de Sanciones, hizo llegar a este Organismo el oficio (...), al que anexó un manuscrito elaborado y firmado por **VD** a través del cual le exponía que era su deseo revocar a su defensora pública **AR3DGDP**, haciendo valer

como motivo, el hecho de que nunca presentó o tramitó lo necesario para el traslado, pues él quería irse a Ocampo, Guanajuato, lo cual le había solicitado a ella desde los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio y el último por virtud del cual insistía en ser trasladado para que se salvaguardara su vida y su integridad física.

194. Con lo anterior, este Organismo advierte que **VD** tenía temor fundado de que su integridad física continuara siendo afectada en el interior del Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas, motivo por el cual él de su puño y letra presentó diversos escritos ante el Juez de Ejecución de Sanciones, solicitando su traslado a algún otro centro penitenciario, de manera que su integridad física y su vida estuvieran salvaguardadas. Petición que también formuló en sendas ocasiones a su defensora pública, la **AR3DGDP**. Advirtiendo que este derecho lo ejercía de conformidad con lo establecido en la Ley del Sistema Penitenciario y Ejecución de Sanciones del Estado de Zacatecas, ya que a ésta le correspondía el asesoramiento técnico jurídico en la realización de cualquier trámite relacionado con el régimen disciplinario o con la ejecución de la sanción, cuando se requiera, así como para la interposición de las gestiones necesarias en resguardo de sus derechos, tal como lo prevé el ordinal 23, párrafo tercero de la ley en cita.

195. Transcendente resulta el hecho de que, las personas sentenciadas están facultadas para hacer valer por sí sus propios derechos; empero, la Ley del Sistema Penitenciario y Ejecución de Sanciones del Estado de Zacatecas, establecía excepciones a este derecho, entre ellas, cuando el ejercicio pleno de los derechos de las personas sentenciadas dependa de las funciones encomendadas a las y los defensores públicos en materia de ejecución de sanciones, pues en este supuesto es a ellos a quienes les corresponde la defensa técnica y adecuada y por tanto, quien tenía el conocimiento técnico del procedimiento a seguir para el traslado, no lo era el sentenciado, sino su defensora.

196. Pues para ejercer el derecho que les asiste a las personas privadas de la libertad, como era el caso de **VD**, para tramitar ante el Juez de Ejecución de Sanciones el traslado de un centro penitenciario a otro, corresponde a la Defensa Pública incoar los instrumentos idóneos y ante la instancia correspondiente (Juez de Ejecución) para lograr la salvaguarda de los derechos humanos de su defenso, particularmente cuando la vida está de por medio y así lo manifestó en reiteradas ocasiones el sentenciado **VD**. Pero, además, por que en variadas fechas el Juez de Ejecución de Sanciones **SP1**, requirió a la **AR3DGDP** defensora de **VD**, por un lado, respecto a que de sus escritos no se advertía petición alguna qué acordar; así como que, con los escritos presentados de manera personal y directa por el sentenciado, se le diera vista para que concretara alguna solicitud; incluso, se vio en la necesidad de resaltar en el acuerdo emitido el 10 de julio de 2021, luego de que **VD** presentara otro ocurso, se le diera vista a su defensora pública para que tuviera a bien concretar la **SOLICITUD DE TRASLADO** y con ello ejerciera en favor de **VD** una Defensa Técnica y Adecuada.

197. Posteriormente, en el acuerdo de 12 de julio de 2019, el Juez de Ejecución de Sanciones, destacó nuevamente con letras negras y algunas de ellas subrayadas, el hecho de que ese Juzgado estaría a la espera de atender alguna posible solicitud de traslado, por parte de la Defensa y el sentenciado, debiendo colmar los requisitos que marca la Ley del Sistema Penitenciario y de Ejecución de Sanciones del Estado de Zacatecas. Con lo cual se advierte que el Juzgador en diversas ocasiones le hizo saber a la Defensa Pública que era necesario que tramitara el traslado de **VD** de conformidad con el marco legal que le regía al sentenciado, sin que la **AR3DGDP** ejerciera la defensa técnica y adecuada en favor de **VD**, pues en ningún momento presentó en la vía incidental el traslado de su defenso, por el contrario, prefería acogerse a las conversaciones que ella sostenía y en las cuales, afirmaba **VD** se desistía del traslado o afirmaba encontrase bien en las instalaciones del Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas.

198. Finalmente, no se soslaya que tal como lo advirtió el Juez de Ejecución de Sanciones, mediante el escrito presentado por la Defensora Pública el 15 de agosto de 2019, no se planteó el incidente de traslado, pues consistía únicamente en una solicitud, sin cumplir con los

requisitos legales de la vía incidental de traslado, por lo cual, el Juez de Ejecución acordó y nuevamente advirtió a la persona sentenciada y a su defensora pública que si bien es cierto, a él le correspondía autorizar los traslados de una persona privada de la libertad a otro centro penitenciario, para ello se debía tramitar un incidente y en su caso particular, ni la defensa pública, ni la Dirección General de Prevención y Reinserción Social del Estado, lo habían promovido, señalando además, que esa acción escapaba de las funciones del referido juzgador.

199. Pese a los múltiples requerimiento y advertencias realizadas por el Juez de Ejecución de Sanciones, para que a través de una defensa técnica y adecuada se instara o promoviera en la vía incidental el traslado de **VD** a otro centro penitenciario, éstas fueron soslayadas por la **AR3DGDP** quien no conforme con no representar adecuadamente los derechos de su defenso, el 28 de agosto de 2019, exhibió un escrito mediante el cual, aparentemente **VD** se desistía de las múltiples solicitudes de traslado y manifestaba su deseo de permanecer interno en el Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas, lo cual fue desvirtuado por el propio quejoso ante personal adscrito a este Organismo pues afirmó que, además, se vio en la necesidad de revocar a su defensora pública, en virtud de que ésta no tramitaba su traslado, el cual había solicitado desde febrero de 2019.

200. Tal revocación data del 02 de septiembre de 2019, fecha en la cual presentó su escrito el sentenciado **VD**, cuyo argumento toral consistió en que la **AR3DGDP** había sido omisa en realizar los trámites necesarios para su traslado, exponiendo que éstos los había estado solicitando en los meses de febrero, marzo, abril, mayo y junio. Además, hizo énfasis en que seguía solicitando su traslado por el temor que tenía de perder la vida al interior del Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas.

201. El escrito presentado por **VD** fue acordado en la misma fecha de su presentación, mediante el cual el **SP1**, Juez de Ejecución de Sanciones Penales del Distrito Judicial de la Capital, obviamente advirtió una contradicción entre los últimos escritos ante él presentados pues a través de unos **VD** solicitaba su traslado y, en otros se desistía del mismo. En ese mismo acuerdo, el Juez de Ejecución de Sanciones, solicitó se diera vista a la Defensora Pública **AR3DGDP**, y a la entonces Directora del Instituto de la Defensoría Pública del Estado, para que se designara nueva defensora y se promoviera el traslado de **VD** a diverso centro penitenciario. Revocación que surtió efectos pues a partir del 03 de septiembre de 2019, fecha en que fue asignada como defensora pública de **VD** la **SP15**, a quien no le fue posible presentar en favor de su defenso el incidente de traslado, en virtud de que el 10 de septiembre de 2019, solicitó una prórroga de tiempo, a fin de imponerse de las constancias que conforman el expediente, la cual le fue otorgada por el término de 10 días hábiles, tiempo en el cual **VD** perdió la vida.

202. Corolario de lo anterior, se puede advertir que, la **AR3DGDP**, Defensora Pública del sentenciado **VD**, no asumió una defensa técnica y adecuada como lo establecía la Ley del Sistema Penitenciario y Ejecución de Sanciones del Estado de Zacatecas, pues aun y cuando tenía pleno conocimiento de las condiciones en las cuales vivía su defenso, entre ellas el hacinamiento, la falta de actividades productivas y útiles para su reinserción, las múltiples ocasiones en las que fue agredido físicamente en las diversas áreas que habitó en el interior del Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas, así como las múltiples ocasiones en que **VD** le solicitó que hiciera algo para preservar su vida, ésta fue omisa y no promovió lo que en derecho correspondía, aun y cuando en sendos acuerdos el Juez de Ejecución la requería para que presentara en la vía incidental la solicitud de traslado, siguiendo los lineamientos que para tal efecto planteaba la Ley del Sistema Penitenciario y Ejecución de Sanciones del Estado de Zacatecas, pues como el Juzgador lo refería, él no podía constituirse en Juez y parte para determinar sobre el traslado de **VD,** ya que eso le correspondía a la Defensora Pública en materia de ejecución de sanciones.

203. Lo anterior se sostiene al remitirnos a la Ley del Sistema Penitenciario y Ejecución de Sanciones del Estado de Zacatecas, en donde el artículo 119, fracción XX, establece la facultad y obligación del Juez de Ejecución, para conocer de los incidentes que surjan con motivo de la

ejecución de las sanciones; luego, en el artículo 141, establece que se podrán plantear incidentes para resolver, por cuestiones que de alguna forma beneficien la situación jurídica del sentenciado y que no se refieran a las previstas en el artículo 119 fracción XIII de esa Ley[87], promovida por éste o su defensor o a solicitud de la Dirección General. Por su parte, en los numerales 142 y 143 el legislador zacatecano estableció la temporalidad y el trámite del desarrollo incidental. En este punto, esta Comisión de Derechos Humanos coincide con el Juez de Ejecución de Sanciones, en el sentido de que, bajo las reglas y principios del sistema acusatorio y adversarial[88], el Órgano Jurisdiccional no puede aperturar el trámite incidental, pues en todo caso quienes deben echar a andar el andamiaje judicial, son las partes.

204. En atención a las constancias valoradas con anticipación, este Organismo arriba a la conclusión que la Defensora Pública, **AR3DGDP** incurrió en responsabilidad al omitir ejercer una defensa técnica y adecuada en favor de **VD** quien en múltiples ocasiones le solicitó tramitara lo correspondiente para ser trasladado del Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas, a algún otro Centro Penitenciario, entre los cuales enunció al que está ubicado en Ocampo, Guanajuato, o a alguno federal, con tal de salvaguardar su integridad física y su vida. Lo que trae aparejado que se actualicen violaciones a los derechos humanos que le asistían a **VD** respecto a una defensa adecuada, en materia de ejecución de sentencia, así como a la reinserción social.

> **b)** Por lo que hace al Sistema Penitenciario, representado en ese momento por el **AR1SSP,** Director General de Prevención y Reinserción Social del Estado y por el Teniente Coronel **AR2SSP,** Director del Centro Regional de Reinserción Social Varonil, de Cieneguillas, Zacatecas:

205. Como se ha venido señalando, para efectos de trasladar a un sentenciado de un centro penitenciario a otro, existen tres vías:

- ✓ Si el traslado es solicitado por el sentenciado
- ✓ Si el traslado es solicitado por la Dirección General o por alguna autoridad de otra entidad federativa.
- ✓ En casos urgentes, la Dirección General realizará el traslado del sentenciado aún sin el consentimiento de la persona privada de la libertad, debiendo mediar una razón concreta y grave que lo justifique, debiendo notificar al Juez de Ejecución al siguiente día hábil.

206. Lo anterior deja en claro que, básicamente, el traslado puede ser de forma voluntaria o involuntaria, los primeros, operan cuando existe interés de una persona sentenciada para ser trasladada a otro centro, caso en el cual, el Juez de Ejecución requerirá su consentimiento expreso en presencia de su defensor, y no podrá negarse a trasladarlo cuando se acrediten los supuestos establecidos en el párrafo octavo del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por su parte, los traslados involuntarios son aquellos que, por definición, no son solicitados por el sentenciado, sino que pueden ser requeridos por la autoridad penitenciaria, pero deben ser autorizados previamente por el Juez de Ejecución.

207. Por tanto, queda claro que en estricta aplicación de la Ley del Sistema Penitenciario y Ejecución de Sanciones del Estado de Zacatecas, en el ordinal 92, establece dos formas de traslado que le resultan aplicables a la Dirección General, siendo aquel que haga valer ante el Juez de Ejecución de Sanciones, mediante un incidente y aquel que por casos urgentes deba realizar, sin consentimiento de la persona privada de la libertad, con la obligación posterior de notificar al Juez.

---

[87] Artículo 119. El Juez de Ejecución tendrá las facultades y obligaciones siguientes:
(…)
XIII. Resolver, en audiencia oral, todas las peticiones o planteamientos de las partes, relativos a la revocación de cualquier beneficio o sustitutivo concedido a los sentenciados por la autoridad judicial competente, y en aquellos casos en que deba resolverse sobre los beneficios de libertad anticipada o respecto a la libertad definitiva y todas aquellas peticiones que por su naturaleza o importancia requieran debate o producción de prueba;

[88] Ley del Sistema Penitenciario y Ejecución de Sanciones del Estado de Zacatecas, artículo 5, Los principios que orientan a esta Ley son: I. Debido proceso (…); II. Jurisdiccionalidad (…); III. Inmediación (…); IV. Confidencialidad; V. Gobernabilidad y seguridad institucional

208. Luego entonces, el párrafo octavo, del artículo 18 Constitucional, establece una excepción al traslado voluntario, en tratándose de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad, cuando exista riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad, permitiéndose a la autoridad administrativa penitenciaria ejecutar su reubicación con el deber de informárselo al Juez al día siguiente hábil.

209. Por su parte, el artículo 27 del Reglamento Interno de los Centros de Readaptación Social del Estado, señala que "la Dirección General de Prevención y Readaptación Social, está facultada para ordenar, por razones de seguridad de las personas o de las instituciones, el traslado de las personas privadas de la libertad a otros centros de readaptación social. En este caso se dará aviso por escrito dentro de las veinticuatro horas siguientes, a la autoridad a cuya disposición se encuentran el o las personas privadas de la libertad trasladados, así como a sus defensores y familiares."

- ✓ Traslado solicitado por la Dirección General

210. Respecto de la primera hipótesis, se tiene que el 10 de julio de 2019, el entonces Director del Centro Regional de Reinserción Social Varonil, Cieneguillas, Zacatecas, Teniente Coronel **AR2SSP,** remitió escrito de solicitud de traslado, suscrito por **VD**, el cual habían recibido el 08 de julio anterior, del cual el Juzgador de Ejecución de Sanciones ordenó dar vista a la Defensora Pública para que concretara la solicitud de traslado, así como la notificación, entre otros, a la Dirección General de Prevención y Reinserción Social del Estado, a la Dirección del Centro Regional de Reinserción Social Varonil, Cieneguillas, Zacatecas; sin embargo, el hecho de haber presentado ante el Juzgador la solicitud de traslado voluntario suscrita por **VD** de ninguna manera se traduce en un cumplimiento del deber legal a incoar el incidente como parte del procedimiento de ejecución de sanciones.

211. Luego, se advierte que la Defensora Pública, **AR3DGDP,** en diversas ocasiones presentó escritos ante la Dirección General de Prevención y Reinserción Social del Estado, solicitando un posible traslado voluntario de **VD**, en el algún centro o cárcel distrital de esta entidad o incluso a un centro federal, además de remitir atentos recordatorios ante sus peticiones, sin que se concretara nada al respecto, aun y cuando la citada autoridad penitenciaria fue debidamente notificada por el Juzgado de Ejecución.

212. Por otra parte se advierte que el Juez de Ejecución de Sanciones **SP1**, requirió al Director General de Prevención y Reinserción Social del Estado y al Director del Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas, para que opinaran sobre el probable traslado, ante lo cual, el 11 de septiembre de 2019, el entonces Director del Centro Regional de Reinserción Social Varonil, Cieneguillas, Zacatecas, Teniente Coronel **AR2SSP**, evacuó la vista y afirmó que se sumaba a la petición de traslado hecha por **VD** e incluso advirtió que **era cierto el temor que tenía el sentenciado por su vida**; ante lo cual el Juez de Ejecución de Sanciones Penales, le hizo saber que, al ser parte dentro del procedimiento de ejecución, como autoridad penitenciaria, era la indicada para promover el traslado de una persona sentenciada, pues no bastaba mostrar anuencia o voluntad al traslado, sino que era su obligación promover el incidente de traslado a favor de **VD.**

213. Sin que de las copias de la carpeta de ejecución (...) agregadas tanto por la Defensora Pública, como por el Juez de Ejecución, se tenga documento alguno que haga presuponer que la Autoridad Penitenciaria atendió a los requerimientos efectuados por el Juzgador para que promoviera el incidente de traslado voluntario de **VD**; así tampoco obra documento alguno que nos lleve a la conclusión de que atendió a las múltiples solicitudes efectuadas por la Defensora Pública, para que en conjunto tramitaran el citado incidente de traslado, quien incluso no solo pedía que su defenso fuera trasladado a algún centro dependiente de la citada autoridad administrativa, sino que incluso, solicitó el traslado a un centro federal, cuestiones que no fueron atendidas, aun y con conocimiento pleno del riesgo que la integridad física y la vida de **VD** corrían al continuar en el Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas.

214. Para este Organismo no pasa desapercibido que los fundamentos legales que hacía valer en sus escritos el entonces Director del Centro Penitenciario, referían a la Ley Nacional de Ejecución Penal, misma que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de julio de 2016, con entrada en vigor al día siguiente, misma que, como ya se dijo, no le resultaba aplicable a **VD**, por haber sido sentenciado el 23 de agosto de 2013, con la vigencia de la Ley del Sistema Penitenciario y Ejecución de Sanciones del Estado de Zacatecas.

215. Lo anterior es así pues con la entrada en vigor de la Ley Nacional, el artículo tercero transitorio establece: "A partir de la entrada en vigor de la presente Ley, quedarán abrogadas la Ley que Establece las Normas Mínimas Sobre Readaptación Social de Sentenciados y las que regulan la ejecución de sanciones penales en las entidades federativas. Los procedimientos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente ordenamiento, continuarán con su sustanciación de conformidad con la legislación aplicable al inicio de los mismos, debiendo aplicar los mecanismos de control jurisdiccional previstos en la referida Ley, de acuerdo con el principio pro persona establecido en el artículo 1o. Constitucional. A partir de la entrada en vigor de la presente Ley, se derogan todas las disposiciones normativas que contravengan la misma.

216. Por lo que queda claro que la autoridad penitenciaria, al igual que la **AR3DGDP**, no cumplió con su deber de presentar un incidente de traslado voluntario, pues ambas autoridades tenían las facultades para realizarlo de forma conjunta o separada y, sin embargo, ninguna presentó el incidente de traslado en favor de **VD**, a fin de que fuera en otro centro penitenciario en donde continuara cumpliendo su sentencia.

- ✓ Traslado en caso urgente

217. En ese sentido, si bien es cierto, por regla general, se requiere autorización judicial para que una persona privada de su libertad sea trasladada a un diverso centro penitenciario; sin embargo, la legislación referida regula la posibilidad de realizar el traslado por casos de urgencia, sin autorización judicial previa y sin consentimiento de la persona privada de la libertad, lo que se traduce en implementación de medidas especiales de seguridad, como lo enmarca el ordinal 18 de la Constitución Federal.

218. En el caso de **VD**, la Autoridad Penitenciaria dejó de observar el marco constitucional y legal que le obligaba a aplicar, pues existía riesgo objetivo para la integridad de la persona privada de su libertad, ya que en reiteradas ocasiones fue lesionado, esto mientras se encontraba en el área de población; luego, tomando como medida de seguridad el hacinarlo en el área del OCLADE, primero en la celda 9, con 5 personas privadas de la libertad más, quienes lo agredieron físicamente; posteriormente, bajo ese mismo concepto de medida de seguridad, lo hacinaron en la celda número 1, planta baja del mismo OCLADE, lugar en el cual habitaba conjuntamente con otras 7 personas, lo que, como ya quedó previamente analizado, constituye una pena adicional, que genera violaciones a los derechos humanos y dificulta las prestaciones básicas que deben asegurarse a las personas privadas de libertad[89].

219. Entonces, la autoridad penitenciaria soslayó las múltiples ocasiones en que, mientras tenía la calidad de garante de la vida y seguridad de **VD**, fue lesionado en su integridad física, en por lo menos 5 ocasiones, en un lapso de tiempo del 07 de mayo al 13 de septiembre en que perdió la vida, esto es, el 07 de mayo y 08 de julio de 2019[90], el 04 de agosto de 2019[91], el 01 de septiembre de 2019[92], y 08 de septiembre de 2019[93].

---

[89]CNDH HACINAMIENTO PENITENCIARIO EN AMÉRICA LATINA: CAUSAS Y ESTRATEGIAS PARA SU REDUCCIÓN María Noel Rodríguez, publicado en 2015. Página 51

[90]Información proporcionada por el Teniente Coronel **AR2SSP,** mediante el oficio (...), suscrito el 29 de mayo de 2019, foja 50 de la carpeta administrativa (...). Así como del escrito presentado por **VD** el 03 de septiembre de 209, ante el Juez de Ejecución de Sanciones Penales.

[91]Información proporcionada por **VD** mediante escrito de 06 de agosto de 2019. Así como del informe rendido por **SP14,** Primer Comandante del Segundo Grupo de Guardia, foja 123, *ídem*.

[92]Información proporcionada el 02 de septiembre de 2019 por **VI,** y constatada por personal de este Organismo el 04 de septiembre siguiente.

[93]Información proporcionada el 09 de septiembre de 2019, por **VI,** y constatada por personal de este Organismo, el 10 de septiembre siguiente.

220. Asimismo, eludió las múltiples ocasiones en las que **VD** manifestó temer por su vida y su integridad física, pues nada de esto se desconocía, ya que desde que se inició la queja que ahora se resuelve, se le solicitó informe de autoridad al cual se anexó copia íntegra de las comparecencias de queja, en las que claramente **VD** externó haber sido agredido físicamente por personas privadas de la libertad del área del OCLADE, quienes lo tenían amenazado, y que de ello tenía conocimiento un comandante de seguridad y custodia y el Director del Centro Penitenciario.

221. En adición, el Juez de Ejecución de Sanciones Penales, requirió al entonces Director General de Prevención y Reinserción Social del Estado, a fin de que informara porqué **VD** acudió lesionado a la audiencia del 08 de mayo de 2019, eludiendo su responsabilidad, al informar que tanto **VD** como PPL1, fueron golpeados porque los agarraron descuidados, sin percatarse de quiénes fueron los agresores, cuestión que de sí, ya fue reprochada por este Organismo en el apartado correspondiente al derecho de las personas privadas de la libertad a que se proteja su integridad personal, pues no se siguió ningún procedimiento de investigación para identificar a los agresores, ello se afirma, en virtud de que al informe de autoridad no se anexó documento o prueba alguna, pero basta con remitirnos a las copias de la carpeta de ejecución (...), agregadas por las diversas autoridades.

222. Por lo cual, como se lo hizo saber el Juez de Ejecución en su momento, la Autoridad Penitenciaria podía ejecutar su reubicación, por caso urgente, al encontrarse en riesgo no solamente la integridad física, sino la vida misma de **VD**, y al hacerlo, la única obligación posterior a ello, sería informárselo al Juez al día siguiente hábil, cuestión que no ocurrió, pues al ser agredido en el área de población los días 07 de mayo y 08 de junio de 2019, solamente fue reubicado al área de OCLADE, como ya se dijo, en donde se encontraba hacinado, propiciando con ello que en la celda 09, de la planta alta, donde habitaba conjuntamente con otras 5 personas, lo lesionaran; luego, lo reubicaron nuevamente, pero ahora en la celda 1, en la planta baja, con 7 personas más, en donde fue agredido nuevamente, tomando nuevamente la decisión de reubicarlo, en el pasillo, lugar que de ninguna manera era apto para la estancia y permanencia de personas privadas de la libertad y que tampoco fue un espacio en el cual estuviera seguro, pues ahí volvió a ser agredido.

223. Finalmente y en cumplimiento de la suspensión de plano emitida por un Juez Federal, la autoridad lo reubicó en la celda 2, del bloque B, del OCLADE, solo, lugar en el que perdió la vida el mismo día de su reubicación, (...). Lo que deja en claro que ninguna de las “medidas de seguridad” que implementó la Autoridad Penitenciaria, fueron efectivas y eficaces. Pues en todo caso, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 18, la Ley del Sistema Penitenciario y Ejecución de Sanciones del Estado de Zacatecas, en su ordinal 92, fracción III, le facultaban para trasladar a **VD** como una verdadera medida especial de seguridad, al constituirse un caso urgente, aún sin el consentimiento de la persona privada de la libertad, pues tenía razones concretas y graves para justificarlo, salvaguardar la integridad física e incluso la vida de la persona que se encontraba bajo su cuidado.

224. Más grave resulta el hecho de que tanto el entonces Director General de Prevención y Reinserción Social del Estado, Inspector **AR1SSP** y el entonces Director del Centro Regional de Reinserción Social de Cieneguillas, Zacatecas, Teniente Coronel **AR2SSP**, tenían pleno conocimiento que tanto la integridad física como la vida de **VD** estaban en riesgo, pues así lo hicieron del conocimiento al informar al Juez de Ejecución de Sanciones que el sentenciado se encontraba con medidas especiales de vigilancia en el área del OCLADE para salvaguardar su integridad física. Obra además la declaración del Director del Centro Penitenciario, al suscribir el oficio (...), presentado ante el Juez de Ejecución el 11 de septiembre de 2019, es decir 2 días previos al deceso de **VD**, quien manifestó: “Por otra parte se observa en su solicitud de traslado en la que refiere que teme por si vida (sic) en este Centro lo cual es cierto de ahí que como refiero se le ubicó en el área de OCLADE por lo cual esta Dirección se suma a la solicitud de la persona privada de la libertad **VD** a fin que desde luego su Señoría le autorice la petición de traslado que ha hecho ante ese Juzgado.”.

225. Lo anterior es reprochable, pues al ser la Autoridad Penitenciaria una de las partes en el procedimiento de ejecución de sanciones y contar además, con facultades y obligaciones constitucionales y legales para, por un lado, solicitar el traslado voluntario a trasvés de un incidente y, por otro ejecutar un traslado urgente, sin consentimiento del sentenciado y sin previa autorización judicial, aunado a que contaba con la certeza de que tanto la integridad física como la vida de **VD** se encontraban en riesgo, no promovió el primero, ni ejecutó el segundo, con lo cual se pudiera haber salvaguardado la integridad personal y la vida del ahora fallecido **VD.**

226. En adición, el (...), fecha del deceso de **VD**, el **AR1SSP,** entonces Director General de Prevención y Reinserción Social del Estado, presentó ante el Juez de Ejecución de Sanciones el acta emitida por el Consejo Técnico Interdisciplinario, donde se afirmó que **VD**, no era apto para ser ingresado a un centro penitenciario de mínima seguridad, recomendando su internamiento en un centro federal.

227. Lo externado por el Director General de Prevención, basado en el acta del Consejo Técnico Interdisciplinario, el propio sentenciado lo había estado solicitando desde el 15 de agosto de 2019; es decir, casi un mes antes la propia persona privada de la libertad, buscando salvaguardar su vida, solicitó ser traslado al CEFERESO número 12, de Ocampo, Guanajuato, pues refirió que el domingo anterior, entre las 5:00 y las 5:30 sus compañeros de celda quisieron ahorcarlo, pero que fue gracias a que se les pudo zafar, que logró salvar su vida, lo cual, una vez acordado en el expediente (...), se le notificó a las autoridades penitenciarias.

228. Finalmente, como se desprende del expediente de queja, luego de cumplir con las medidas ordenadas por el Juez Federal, en la suspensión de plano, emitida dentro del juicio de amparo (...), el (...), **VD** fue reubicado dentro de la propia área del OCLADE, en el bloque B, celda 2, en donde en esa misma fecha perdió la vida.

229. Corolario de lo anterior, esta Comisión arriba a la conclusión de que tanto la **AR3DGDP,** Defensora Pública adscrita al Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Zacatecas, el **AR1SSP,** quien fungía como Director General de Prevención y Reinserción Social del Estado de Zacatecas, así como el Teniente Coronel **AR2SSP**, entonces Director del Centro Regional de Reinserción Social de Cieneguillas, Zacatecas, vulneraron el derecho a la legalidad y seguridad jurídica del aquí quejoso **VD**, en virtud de la omisión en la que incurrieron al no acatar lo ordenado por el artículo 18, párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los ordinales 91 y 92 relacionados con los numerales 119, fracción XV, 141 y 142 de la Ley del Sistema Penitenciario y Ejecución de Sanciones del Estado de Zacatecas, particularmente, por lo que hace a la primera de las enunciadas, desatendió su marco legal, además los artículos 2°, fracción III, 7°, 8° fracciones I y V, 9 y 39 de la Ley Del Instituto De La Defensoría Pública Del Estado De Zacatecas, pues aún ante las múltiples agresiones físicas y el conocimiento pleno del riesgo que corría la vida de **VD** ninguna de las referidas autoridades y/o servidores públicos presentaron de forma separada o conjunta el incidente de traslado ante el Juez de Ejecución, y por cuanto hace a la Dirección General, fue omisa en ejecutar el traslado urgente, aun sin el consentimiento del sentenciado, en cuyo caso, su obligación posterior era, darle aviso al Juez de Ejecución al día siguiente hábil.

c) Por lo que hace al **SP1,** Juez de Ejecución de Sanciones Penales del Distrito Judicial de la Capital, por lo que se emite el Acuerdo de No Responsabilidad:

230. En este punto, se hace necesario retomar el contenido de los ordinales 91, 92, 119, fracción XV, relacionados con el 141 y 142 de la Ley del Sistema Penitenciario y de Ejecución de Sanciones del Estado de Zacatecas, por lo que, en tratándose de traslado de personas privadas de la libertad, se puede hacer mediante tres vías, cuando sea la Dirección General de Prevención y Reinserción Social del Estado, previa autorización de la autoridad judicial correspondiente y a través de un incidente planteado ante el Juez de Ejecución de Sanciones

Penales, ya sea por el sentenciado, por sí o a través de su Defensa Pública, la autoridad penitenciaria u otra autoridad federal.

231. Luego, si el traslado es solicitado por el sentenciado, el Juzgador tomará en cuenta los motivos que invoque, así como las condiciones generales del establecimiento al que se pretenda trasladar; si el traslado es solicitado por la Dirección General o por alguna autoridad de otra entidad federativa, tomará en cuenta la necesidad de la persona privada de la libertad de estar cumpliendo con su pena en lugares próximos o cercanos a su familia, a su comunidad, al defensor o representante legal; y en casos urgentes, la Dirección General realizará el traslado del sentenciado aún sin el consentimiento del personal privado de la libertad, debiendo mediar una razón concreta y grave que lo justifique, debiendo notificar al Juez de Ejecución al siguiente día hábil.

232. Entonces, el Juez de Ejecución resolverá las peticiones de traslado que formule la Dirección, las personas privadas de la libertad autoridades de otras entidades federativas, a través de incidentes en los que resolverá cuestiones que de alguna forma beneficien la situación jurídica del sentenciado, las partes que pueden promover dicho incidente son el sentenciado o su defensor o a solicitud de la Dirección General.

233. Por lo que, como lo advierte el Juez de Ejecución de Sanciones, la Ley no establece la posibilidad que sea el propio juzgador quien aperture un incidente y luego resuelva sobre el mismo; pues en todo caso, el sentenciado por sí o por conducto de su Defensora Pública, la Dirección General o incluso las autoridades de otras entidades federativas, al constituirse como parte en el proceso de ejecución de sanciones, son quienes deberán acudir ante el Juzgado a interponer el incidente correspondiente y éste último .

234. En este punto, se hace necesario retomar las fechas de solicitud de traslado, así como los acuerdos recaídos en éstas, las notificaciones y evacuaciones a las mismas que se realizaron por parte de las diversas autoridades que participaron, lo que se hace a continuación:

235. El 14 de junio de 2019, **VD** presentó un escrito mediante el cual refirió no ocupar medidas especiales de seguridad, además que era su deseo permanecer en área de población del Centro Regional de Reinserción Social Varonil, Cieneguillas, Zacatecas, mismo que fue acordado en la misma fecha y se ordenó dar vista a la Defensa Pública para concretar alguna otra solicitud, lo que fue debidamente notificado el 19 de junio tanto a la defensora como a su representado.

236. El 21 de junio en evacuación de la vista, la Defensora Pública **AR3DGDP**, refirió que su defenso **VD,** solicitaba continuar viviendo en población del Centro Regional de Reinserción Social Varonil, Cieneguillas, Zacatecas y no necesitar medidas especiales de seguridad, lo cual fue acordado en la misma fecha, en sus términos y notificado al sentenciado el 25 de junio siguiente.

237. El 10 de julio de 2019, **VD** presentó un escrito mediante el cual solicitó su traslado al penal más cercano a su familia. En esa fecha el Director del Centro Regional de Reinserción Social Varonil, Cieneguillas, Zacatecas, remitió al Juzgado de Ejecución de Sanciones un escrito de solicitud de traslado, suscrito por **VD**, el cual había exhibido el sentenciado ante la referida Dirección el 08 de julio de esa misma anualidad. Ambos escritos fueron acordados por el Juez de Ejecución en la misma fecha de presentación, ante los cuales se reservó el pronunciamiento respectivo, hasta en tanto se diera vista a la Defensa Pública, para que concretara la solicitud de traslado, notificando el mismo día a la Defensora Pública, a la Dirección General de Prevención y Reinserción Social del Estado, a la Dirección del Centro Regional de Reinserción Social Varonil, Cieneguillas, Zacatecas, así como al sentenciado.

238. El 12 de julio de 2019, en evacuación de la vista, la Defensora Pública, presentó un escrito mediante el cual refirió al Juzgador de Ejecución Penal que la única prueba con la que contaba para el traslado de **VD**, que era su propio dicho; además de informar que solicitó a la Dirección

General de Prevención un posible traslado voluntario. En esa misma data **VD**, presentó un escrito mediante el cual solicitó su traslado; promociones que fueron acordadas en la misma fecha, con el señalamiento del Juez de Ejecución que estaría a la espera de atender alguna posible solicitud de traslado, de concretarse por la Defensa y el sentenciado, sabedores que debía colmarse los requisitos legales, en tanto que a **VD**, se le pidió se estuviera a lo acordado ese día, lo cual fue notificado al sentenciado en la misma fecha y a la Defensora Pública el 16 de julio siguiente.

239. El 06 de agosto de 2019, **VD** presentó un escrito de solicitud de traslado, acordado en esa misma fecha, advirtiéndose que la solicitud ya se encontraba siendo atendida por la Defensora Pública, con quien debía tener comunicación y estarse a lo acordado el 12 de julio anterior, notificado el mismo día a la Defensora Pública, al sentenciado y a la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, a ésta última como notificación y requerimiento.

240. El 15 de agosto de 2019, la Defensora Pública presentó un escrito a través del cual le refería al Juez de Ejecución que **VD** solicitaba su traslado aunque fuera a un centro federal, y en el mismo escrito ella hizo hincapié que era una situación difícil debido a su anterior fuga (lo cual ya le fue reprochado en el apartado respectivo a la **AR3DGDP**), en este escrito también hizo del conocimiento que envió un recordatorio a la Dirección General sobre la solicitud de traslado. Anexó a su escrito los documentos que consideró justificaban su pretensión, entre ellos copia de la visita carcelaria al justiciable, del que se desprende que expresamente **VD** solicitaba el traslado al CEFERESO #12 de Ocampo, Guanajuato. Escrito que fue acordado en esa misma fecha señalando el Juez de Ejecución Penal señalando que no se advertía petición alguna qué acordar, o alguna solicitud por atender y que se le debía hacer del conocimiento al sentenciado, que la vía era a través del incidente de traslado, mismo que ni la defensora, ni la Dirección General habían presentado. Lo cual fue notificado en esa misma fecha, a la Defensora Pública, al sentenciado y a la Dirección General de Prevención y Reinserción Social.

241. En evacuación de la vista, el 28 de agosto de 2019, la Defensora Pública, informó al Juez de Ejecución de Sanciones haber acudido a platicar con **VD**, con la finalidad de informarle que, para su traslado, se requería su testimonial, manifestando el sentenciado que por el momento no deseaba ser trasladado, que era su deseo continuar en el Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas, para lo cual anexó el escrito elaborado y firmado por el propio sentenciado el 27 de agosto anterior, del que textualmente se desprende "…Deseo aclarar que me desisto a cualquier traslado quiero y deseo seguir compurgando mi condena en el centro de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas Zacatecas". En esa misma fecha el Juzgador emitió pronunciamiento en el que señaló que se tenía por presentado el escrito y por evacuada la vista de la Defensora, por lo que ese mismo día se notificó al Ministerio Público, a la Defensora Pública y al sentenciado.

242. No obstante el desistimiento anterior, el 02 de septiembre siguiente, **VD** presentó una solicitud de traslado y revocación de Defensora Pública, acordado en esa misma fecha por el Juzgador en el sentido de que no pasó inadvertido que el 28 de agosto se acordó la promoción mediante la cual, tanto el sentenciado como su Defensora refirieron no querer ya traslado a diverso centro penitenciario, por lo que deseaba continuar cumpliendo su pena en el Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas, lo que contradecía su solicitud.

243. El 03 de septiembre de 2019, **VD** presentó un escrito ante el Juzgado de Ejecución de Sanciones, en el que expuso las causas por las cuales solicitaba su traslado, así como que estaba en espera de la designación de Defensora Pública para promover su traslado; el 04 de septiembre siguiente, el Juzgador reservó acordar, para dar vista a la Defensora Pública recién designada y concretara la solicitud de traslado. Asimismo, requirió al Director General de Prevención y Reinserción Social del Estado y al Director del CEREReSO, para que opinaran sobre el probable traslado, además de hacerle del conocimiento al sentenciado que era necesario el trámite de un incidente.

244. El 11 de septiembre de 2019, en evacuación de la vista del 04 de septiembre anterior, el entonces Director del Centro Regional de Reinserción Social Varonil, Cieneguillas, Zacatecas, Teniente Coronel **AR2SSP,** se sumó a la petición de traslado hecho por **VD**, en la que además advirtió que era cierto que el sentenciado temía por su vida, por lo cual fue ubicado en el área del OCLADE. Al anterior ocurso, recayó un acuerdo suscrito por el Juez de Ejecución de Sanciones Penales en la misma fecha, en el que le hizo saber al Director que, al ser parte dentro del procedimiento de ejecución, como autoridad penitenciaria, son los indicados para promover el traslado de una persona sentenciada, pues no bastaba mostrar anuencia o voluntad al traslado, sino que era su obligación promover el incidente de traslado a favor de **VD.**

245. Finalmente, el (...), misma fecha en la que **VD** perdiera la vida, el **AR1SSP,** entonces Director General de Prevención y Reinserción Social del Estado, presentó los oficios (...) y (...), por virtud de los cuales remitió el acta emitida por el Consejo Técnico Interdisciplinario adscrito a esa Dirección, en el que emite opinión respecto del posible traslado del sentenciado a diverso centro penitenciario, así como los estudios en psicología y criminología practicados a **VD,** y de los cuales se desprende que éste no era apto para ser ingresado a un centro penitenciario de mínima seguridad, recomendando en todo caso, su internamiento en un centro federal; el segundo de los oficios refiere a las medidas que, en cumplimiento a la suspensión de plano decretada en el juicio de amparo (...) decretó el Juez Federal, a fin de que cesaran los actos de maltrato, tormento y golpes, se otorgara al quejoso una celda adecuada en la cual tener sus pertenencias, se le permitiera salir a las áreas de trabajo y realizar actividades que se impartan en el interior del centro y recibiera alimentación adecuada, garantizando en todo momento su integridad física, moral y psicológica. Los ocursos fueron acordados el mismo día 13 de septiembre, en donde se le pidió estarse a lo acordado el 11 de septiembre anterior, es decir, que la Autoridad Penitenciaria, como parte en el procedimiento de ejecución, es quien puede presentar el incidente de traslado o bien, llevar a cabo el traslado urgente como facultad exclusiva de dicha autoridad.

246. En ese acuerdo, el Juzgador hizo hincapié que, por sí, no podía ordenar el traslado de **VD** si no existía algún trámite de por medio, lo anterior, atendiendo al debido proceso bajo las reglas del sistema acusatorio.

247. Atendiendo a la reforma constitucional de 18 de junio de 2008, en la que se introdujo un cambio de paradigma en lo atinente a la materia penal, instaurando un sistema de naturaleza acusatoria y oral, mismo que se rige por una serie de principios, como publicidad, contradicción, concentración, continuidad, inmediación, que le sirven de guía y determinan sus características, cuya trascendencia es tal que se encuentran instituidos en el primer párrafo del artículo 20 constitucional.

248. El principio de contradicción, implica que las partes podrán conocer, controvertir o confrontar los medios de prueba, así como oponerse a las peticiones y alegatos de la otra parte[94]. En ese sentido, el principio en comento indudablemente permite el equilibrio entre las partes y conduce a un pleno análisis judicial de la contienda, es decir, los actos de cada parte procesal, estarán sujetos al control del otro, teniendo en este aspecto igualdad procesal para sostener la imputación o la defensa, respectivamente; en otras palabras, faculta tanto al imputado y su defensa, como al Ministerio Público y la víctima u ofendido del delito, a refutar cualquier prueba o manifestación de su respectiva contraparte, exponiendo al juez o tribunal que conozca del proceso sus consideraciones sobre la pertinencia, el desahogo o el alcance de lo propuesto.

249. El sentido de contradicción se refiere precisamente a la posición antagónica que asumen las partes, en la fijación de la litis, planteando sus respectivos argumentos y contraargumentos, pues es un tercero ajeno a los hechos, investido de la facultad jurisdiccional del Estado, quien debe escucharlos, y en su momento dictar la sentencia que dirima la controversia. Así lo

[94] Artículo 6 del Código Nacional de Procedimientos Penales

determinó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de la siguiente:

> **SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. SE SUSTENTA EN EL PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN**. Del primer párrafo del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, se advierte que el sistema procesal penal acusatorio y oral se sustenta en el principio de contradicción que contiene, en favor de las partes, el derecho a tener acceso directo a todos los datos que obran en el legajo o carpeta de la investigación llevada por el Ministerio Público (exceptuando los expresamente establecidos en la ley) y a los ofrecidos por el imputado y su defensor para controvertirlos; participar en la audiencia pública en que se incorporen y desahoguen, presentando, en su caso, versiones opuestas e interpretaciones de los resultados de dichas diligencias; y, controvertirlos, o bien, hacer las aclaraciones que estimen pertinentes, de manera que tanto el Ministerio Público como el imputado y su defensor puedan participar activamente inclusive en el examen directo de las demás partes intervinientes en el proceso tales como peritos o testigos. Por ello, la presentación de los argumentos y contraargumentos de las partes procesales y de los datos en que sustenten sus respectivas teorías del caso (vinculación o no del imputado a proceso), debe ser inmediata, es decir, en la propia audiencia, a fin de someterlos al análisis directo de su contraparte, con el objeto de realzar y sostener el choque adversarial de las pruebas y tener la misma oportunidad de persuadir al juzgador; de tal suerte que ninguno de ellos tendrá mayores prerrogativas en su desahogo."[95]

250. Por tanto, el citado principio advierte que son las partes quienes deben incoar ante el Juez sus planteamientos, para que a su vez, éste les escuche y resuelva. Así se establece también en el principio de inmediación, establecido en el artículo 5, fracción III, de la Ley del Sistema Penitenciario y Ejecución de Sanciones del Estado de Zacatecas, dispone que las audiencias y actos procesales que se desarrollen en el procedimiento de ejecución, deberán realizarse íntegramente bajo la observancia directa del Juez de Ejecución, con la participación de las partes.

251. Corolario de lo anterior, queda claro que ninguna de las partes que estaban constreñidas legalmente, plantearon en la vía incidental la solicitud de traslado, para que el Juez de Ejecución pudiera conocer, conforme lo marca el artículo 119, fracción XX de la Ley del Sistema Penitenciario y Ejecución de Sanciones del Estado de Zacatecas, pues si bien es cierto, existen sendos escritos presentados tanto por el sentenciado, como por su Defensora Pública, incluso aquellos en los que la Dirección General de Prevención y Reinserción Social del Estado y la Dirección del propio centro penitenciario advirtieron su anuencia o voluntad para el traslado, ninguno de ellos presentó las formalidades de un incidente, los cuales consistían únicamente en peticiones, con las cuales se dio vista en todo momento a las partes intervinientes en el proceso de ejecución, incluso, se les anunció en diversos acuerdos la necesidad y obligación que tenían de presentar un incidente de traslado, cumpliendo con los requisitos establecidos en la ley.

252. Por lo que hace a la **AR3DGDP**, se retoma el reproche efectuado en el párrafo correspondiente, en el sentido de que su actuación como Defensora Pública se constriñó únicamente a presentar escritos en los cuales le informaba al Juez de Ejecución de Sentencias que **VD** pedía ser trasladado a otro centro penitenciario, pues temía por su integridad física y su vida, pero en los cuales también ella misma concluía que el traslado no era posible en virtud de no contar con pruebas que sustentaran sus argumentos de traslado, que le parecía difícil que ejecutara un traslado en virtud de la fuga del sentenciado, entre otros argumentos. Incluso, presentó un escrito a través del cual afirmó que una vez que acudió con el sentenciado **VD** para solicitarle su testimonio en un posible procedimiento incidental de traslado, éste decidió desistirse y hasta manifestó su deseo de continuar compurgando la sentencia en el Centro Regional de Reinserción Social Varonil, de Cieneguillas, Zacatecas. De lo cual personal adscrito a este Organismo pudo dar cuenta que no fue así, ya que **VD** afirmó mediante declaración que

---

[95] Décima Época, Registro: 160184, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VI, marzo de 2012, Tomo 1, Materia(s): Penal, Tesis: 1a. CCXLIX/2011 (9a.), p. 292.

no firmó ningún desistimiento y que, incluso, derivado de la inacción para su traslado, había revocado a su defensora pública.

253. Finalmente, no se soslaya que en reiteradas ocasiones el Juzgador de Ejecución de Sanciones, requirió al Director General de Prevención y Reinserción Social del Estado, al Director del CERERESO y a la Defensora Pública incoaran el incidente de traslado cumpliendo con los requisitos legales y reglamentarios, así como que opinaran sobre el probable traslado e incluso les advirtió que existía el traslado por caso urgente, cuya facultad era única y exclusivamente de la autoridad penitenciaria.

254. Por lo anterior, este Organismo protector de los derechos humanos, no encuentra conducta alguna que reprocharle al Juez de Ejecución de Sanciones del Distrito Judicial de la Capital, **SP1,** pues de las constancias del expediente administrativo de ejecución de sanciones (...), no se desprende incumplimiento al marco legal que le rige en la materia, por tanto, lo procedente es emitir el presente **ACUERDO DE NO RESPONSABILIDAD**.

D) DERECHO A LA VIDA, EN RELACIÓN CON EL DEBER DEL ESTADO GARANTE DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD.

255. El derecho a la integridad personal es aquél que tiene todo sujeto para no sufrir tratos que afecten su estructura corporal, sea física, fisiológica o psicológica, o cualquier otra alteración en el organismo que deje huella temporal o permanente, que cause dolor o sufrimiento grave con motivo de la injerencia o actividad dolosa o culposa de un tercero.[96]

256. Al respecto, la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 3 establece, que "[t]odo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona." De ahí que, la obligación de velar por el respeto y garantía de los derechos humanos, corresponde al Estado, como ente garante de éstos. En ese contexto, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, señala en su artículo 1.1, que los Estados, "se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción" sin discriminación alguna. Estas obligaciones generales de respeto y garantía, vinculantes para el Estado con respecto a toda persona, implican para éste un mayor nivel de compromiso al tratarse de personas en situación de riesgo o vulnerabilidad."[97]

257. En ese sentido, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, precisa en su artículo 5.2, que "[t]oda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano."[98] Incluso, la Comisión Interamericana otorga especial atención a la situación de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad física, ya que, el hecho de que tales personas se encuentren en una situación de especial vulnerabilidad, aunado a la frecuente falta de políticas públicas al respecto que otorguen la prioridad que el tema merece, implica frecuentemente que las condiciones penitenciarias se caractericen por la violación sistemática de los derechos humanos de tales personas.[99]

258. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, respecto de la obligación del Estado como garante de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, ha establecido que "[e]n los términos del artículo 5.2 de la Convención toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal y el Estado debe garantizarle el derecho a la vida y a la integridad personal. En consecuencia, el Estado, como responsable de los establecimientos de detención, es el garante de estos derechos de los

---

[96]CNDH Recomendación 69/2016 de fecha 28 de diciembre de 2016, párr. 135 y Recomendación 71/2016 del 30 de diciembre de2016, párr. 111.

[97] Informe sobre los derechos humanos de las personas privadas de libertad en la Américas. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, https://www.oas.org/es/cidh/ppl/docs/pdf/ppl2011esp.pdf, párr. 46, de fecha de acceso 11 de julio de 2017.

[98]**CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS (Pacto de San José)**, http://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm, fecha de consulta 21 de febrero de 2018.

[99] Segundo Informe sobre los Derechos Humanos en el Perú. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cap. IX, párr.1, https://www.cidh.oas.org/countryrep/Peru2000sp/capitulo9.htm, fecha de acceso 11 de julio de 2017.

detenidos."[100]Además, ha establecido que "de las obligaciones generales de respetar y garantizar los derechos, derivan deberes especiales, determinables en función de las particulares necesidades de protección del sujeto de derecho, ya sea por su condición personal o por la situación específica en que se encuentre…".[101]

259. Asimismo, ha señalado que "[f]rente a las personas privadas de libertad, el Estado se encuentra en una posición especial de garante, toda vez que las autoridades penitenciarias ejercen un fuerte control o dominio sobre las personas que se encuentran sujetas a su custodia. De este modo, se produce una relación e interacción especial de sujeción entre la persona privada de libertad y el Estado, caracterizada por la particular intensidad con que el Estado puede regular sus derechos y obligaciones y por las circunstancias propias del encierro, en donde al recluso se le impide satisfacer por cuenta propia una serie de necesidades básicas que son esenciales para el desarrollo de una vida digna."[102]

260. De ahí que, cuando el Estado priva de la libertad a una persona, asume una responsabilidad especial relacionada con el respeto y la garantía de sus derechos; ya que, tanto la seguridad como la integridad de éstas, queda bajo su custodia. Por ello, uno de los principales deberes del Estado consiste en ejercer un control efectivo sobre la seguridad interna de los centros penales a su cargo. Pues en la medida en que sea capaz de garantizar dicho aspecto, podrá garantizar los derechos humanos de las y los reclusos.[103] Si el estado es incapaz de mantener el orden y seguridad al interior de los centros penales, será incapaz de cumplir con el objetivo esencial de la pena privativa de libertad; la reforma y la readaptación social de las internas y los internos.

261. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que el respeto a los derechos humanos es un pilar fundamental del sistema penitenciario en México, cuya finalidad es la reeducación y reinserción social de los condenados, con base en el trabajo, la educación, la salud y el deporte.[104] En el mismo sentido, el Comité de Derechos Humanos ha establecido que las personas privadas de la libertad, gozan de todos los derechos humanos protegidos por las normas nacionales e internacionales en la materia, sin perjuicio de las restricciones inevitables en condiciones de reclusión.[105]

262. La Corte Interamericana ha señalado que, toda restricción a los derechos humanos de las personas privadas de su libertad, debe demostrar fehacientemente la necesidad de ésta y regular rigurosamente la limitación de que serán objeto. Asimismo, ha establecido que existen derechos -como la vida, la integridad, el debido proceso, entre otros-, cuya limitación o restricción está prohibida; ya que, toda persona privada de su libertad tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal y el Estado debe garantizarle el derecho a la vida y a la integridad personal. En consecuencia, el Estado como responsable de los establecimientos de detención, es el garante de estos derechos de los detenidos.[106]

263. Luego, a través del caso Instituto de Reeducación de Menor, la Corte determinó que, la garantía de esos derechos corresponde al Estado ya que el interno se encuentra bajo su sujeción y la compurgación de su pena, debe limitarse a la restricción del derecho a la libertad, no anular su titularidad respecto a los diversos derechos humanos que le asisten. Es decir, al privarse de la libertad a una persona, el Estado coloca a ésta en una institucionalización total, ya que al permanecer en un centro de reclusión los diversos aspectos de su vida se someten a

---

[100] CrIDH. Caso Neira Alegría y otros Vs. Perú, Sentencia de 19 de enero de 1995, párr. 60.
[101] Caso Vélez Loor Vs. Panamá, Sentencia de 23 de noviembre de 2010 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), párr. 98
[102]CrIDH. Caso "Instituto de Reeducación del Menor" Vs. Paraguay. Sentencia de 2 de septiembre de 2004 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), párr.152.
[103] Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe sobre los derechos humanos de las personas privadas de libertad en la Américas, aprobado el 31 de diciembre de 2011, págs. 3-6.
[104] Art. 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
[105] Comité de Derechos Humanos, Observación General no. 21 Trato humano de las personas privadas de!a libertad, párr. 3.
[106] Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Neira Alegría y otros vs. Perú, Sentencia de 29 de enero de 1995, Serie C No. 20, párr. 60.

una regulación y control absoluto que, entre otros aspectos, disminuyen radicalmente las posibilidades de autoprotección.

264. Por otro lado, el reconocimiento de la dignidad humana inherente a toda persona, con independencia de sus condiciones particulares o situación jurídica, es una disposición universalmente aceptada en el derecho internacional. En consecuencia, instrumentos como la Declaración Americana y la Convención Americana, reconocen el derecho a la integridad personal de toda persona sujeta a la jurisdicción del Estado.[107] AI respecto el Comité de Derechos Humanos ha establecido que el trato humano y respeto de la dignidad de las personas privadas de su libertad es una norma de aplicación universal, que no depende de los recursos materiales del Estado. En el mismo sentido, los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, reconocen que todas las personas privadas de su libertad que estén sujetas a la jurisdicción del Estado deberán ser tratadas humanamente, con irrestricto respeto a su dignidad, derechos y garantías fundamentales. Dicha garantía se encuentra salvaguardada también en el Sistema Universal, a través del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que consagra de manera expresa en el artículo 10.1 el principio de trato humano como eje fundamental de las normas aplicables a las personas privadas de su libertad.

265. De lo anterior, podemos advertir que la privación de la libertad tiene como único objetivo reeducar y reinsertar socialmente a aquellas personas que han cometido un delito. Por lo cual, el Estado debe cumplir una serie de obligaciones relacionadas con su efectiva protección, a fin de que se cumplan dichos objetivos, sin que se vulneren los demás derechos humanos que éstas poseen. Sobre todo, aquellos relacionados con la salvaguarda de su vida e integridad. Por lo cual, éste tiene la obligación de protegerlos contra actos de violencia provenientes tanto de sus propios servidores, como de los demás reos.

266. La Comisión Interamericana se ha pronunciado sobre la necesidad de que los Estados ejerzan un control efectivo de los centros penitenciarios, a fin de garantizar en todo momento la seguridad de las y los internos, sus familiares y de los propios trabajadores que ahí laboran. Pues, cuando el Estado deja de tener un efectivo control sobre éstos, se generan situaciones que ponen en riesgo no sólo la integridad, sino la propia vida de las personas que se encuentran privadas de su libertad. Contraviniéndose así una de las principales obligaciones en materia de derechos humanos: “garantizarlos”. Asimismo, se traduce en la imposibilidad de que las penas privativas cumplan con su objetivo de reeducación y reinserción social.

267. De manera específica, la Comisión Interamericana ha señalado que la violencia carcelaria es uno de los problemas más graves que enfrentan los sistemas penitenciarios de América Latina, y comprende tanto las agresiones de los agentes del Estado contra las personas privadas de la libertad, como los actos de violencia entre internos o de éstos contra los agentes del Estado o terceras personas.[108] Situación que sólo pueden ser prevenidas a través de acciones concretas que, por un lado, corrijan las deficiencias que permiten el rearme de la población penitenciara y por el otro, permitan proveer los centros penitenciarios de personal capacitado y en número suficiente para asegurar el adecuado y efectivo control.

268. Por su parte, luego de la visita que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hiciera a esta entidad federativa del 23 al 25 de abril de 2019, al emitir su Diagnóstico de Supervisión Penitenciaria 2019, señaló que en el Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas, advirtió la ausencia de un control eficiente en dichos centros, que van desde el control de ingresos, la sobrepoblación, la falta de separación entre los internos, hasta cuestiones relacionadas con alimentación, salud e higiene de la población. De manera específica, por lo que hace al Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas, determinó que resulta importante prestar atención, en lo que al Rubro I aspectos que garantizan la integridad personal del interno, en lo que interesa la insuficiencia de

[107] Cfr. Art. XXV de la Declaración Americana de los derechos y deberes del hombre y art. 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
[108] Comisión Interamericana de Derechos Humanos supra nota 1, pág. 38.

programas para la prevención y atención de incidentes violentos. Rubro II aspectos que garantizan una estancia digna, deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las personas privadas de la libertad. Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene del área médica. Deficiencias en la alimentación. Rubro III condiciones de gobernabilidad, entre las que se encuentra la insuficiencia de personal de seguridad y custodia. Deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones disciplinarias. • Ejercicio de funciones de autoridad por personas privadas de la libertad. Condiciones de autogobierno/cogobierno. Presencia de actividades ilícitas. Presencia de cobros (extorsión y sobornos). Rubro IV reinserción social del interno, ante la deficiente separación entre procesados y sentenciados. Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación. Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. Inadecuada organización y registros para el cumplimiento del plan actividades.[109]

269. Resulta preocupante para este Organismo que, de conformidad con la información derivada de dicho Diagnóstico, en 2019 en esta entidad federativa haya existido el deceso de 5 personas, a decir del mismo, fue un homicidio doloso y 4 aparentes suicidios. Mientras que en el Diagnóstico de Supervisión Penitenciaria 2020, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos pudo dar cuenta de que los homicidios dolosos incrementaron a 2, mientras que los suicidios fueron 4[110].

270. Así, el Estado tiene la obligación de salvaguardar los derechos de las personas privadas de su libertad, sin perjuicio de las restricciones inevitables asociadas a las condiciones de reclusión; pues, al encontrarse éstas bajo su resguardo, no hay ni puede haber ninguna razón para que éste se sustraiga de su deber perentorio de salvaguardar la vida e integridad de las personas que se hallan sujetas a su control y que carecen por sí mismas de capacidad efectiva de autodeterminación y defensa.

271. Ahora bien, por lo que hace al derecho a la vida, ésta ha sido reconocido, tanto en los sistemas internacionales como en el sistema normativo nacional, como derecho fundamental, “cuyo goce es un prerrequisito para el disfrute de todos los demás derechos humanos. De no ser respetado, todos los derechos carecen de sentido. En razón del carácter fundamental del derecho a la vida, no son admisibles enfoques restrictivos del mismo. En esencia, el derecho fundamental a la vida comprende, no sólo el derecho de todo ser humano de no ser privado de la vida arbitrariamente, sino también el derecho a que no se le impida el acceso a las condiciones que le garanticen una existencia digna. Los Estados tienen la obligación de garantizar la creación de las condiciones que se requieran para que no se produzcan violaciones de ese derecho básico y, en particular, el deber de impedir que sus agentes atenten contra él.”[111]Al respecto, el artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como el artículo 6.1 del Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos, señalan que toda persona tiene derecho a la vida, sin condicionar este derecho a si la persona se encuentra o no privada de su libertad. Asimismo, el Comité de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos estableció en su Observación General número 6, precisa que el derecho a la vida, se trata de una garantía consagrada como un derecho supremo respecto del cual no se autoriza suspensión alguna.

272. En el Sistema Interamericano, el derecho a la vida está consagrado en el artículo 1 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en el artículo 4 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en término similares a los señalados en el párrafo anterior. De manera específica, los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, establecen que el respeto al derecho a la protección a la vida no puede ser objeto de suspensión alguna. Por lo tanto, “de conformidad con los artículos 5.1 y 5.2 de la Convención, toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal. Además, el Estado

[109] https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/sistemas/DNSP/DNSP_2019.pdf
[110] https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2021-05/DNSP_2020.pdf
[111] Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala Sentencia de 19 de noviembre 1999 (Fondo), párr. 144.

debe garantizar el derecho a la vida y a la integridad personal de los privados de libertad, en razón de que éste se encuentra en posición especial de garante con respecto a dichas personas, porque las autoridades penitenciarias ejercen un control total sobre éstas."[112]

273. En esas circunstancias, los casos de muertes ocurridas en custodia del Estado, incluyendo las muertes naturales y suicidios, deberán ser investigados de manera imparcial y objetiva, a fin de determinar el grado de responsabilidad en que éste incurrió; ya que el Estado tiene la obligación de garantizar y proteger el derecho a la vida. Para ello, la Corte Interamericana estableció a través del caso Familia Barrios *vs.* Venezuela que la obligación del Estado de proteger y garantizar el derecho a la vida "no sólo presupone que ninguna persona sea privada de su vida arbitrariamente, (…) sino que además requiere que los Estados adopten todas las medidas apropiadas para proteger y preservar el derecho a la vida".[113] Por tanto, el Estado está obligado a mantener el control de los centros de reclusión con estricto apego al respeto de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad.

274. De manera específica, la Corte ha determinado que, las medidas que el Estado debe adoptar para proteger y garantizar el derecho a la vida de las personas privadas de la libertad, abarcan desde aquéllas que favorecen la conservación de un clima de respeto a los derechos humanos hasta aquellas dirigidas a proteger a los internos de la violencia que pueda suscitarse entre ellos. Ya que, dichos actos de violencia, representan una situación de riesgo inminente tanto para la vida de las personas recluidas, como para la de cualquier persona que se encuentre en dichos establecimientos. De ahí que, el Estado deba tener la capacidad de mantener el orden y la seguridad al interior de los centros penitenciarios y así, garantizar la seguridad de las internas y los internos en todo momento, así como de las personas que los visitan y de las propias que laboran en ellos. Al respecto, la Corte Interamericana ha señalado que, atendiendo a esta obligación, el Estado no puede permitir que la seguridad y el orden de las cárceles esté en manos de los reclusos; pues se colocaría a estos en una situación de riesgo permanente, al exponerlos a la violencia y a los abusos por parte de los internos que tengan el poder al interior.[114]

275. En el mismo sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que el Estado transgrede el derecho a la vida de una persona no sólo cuando un agente estatal la priva de la vida, sino también cuando no adopta las medidas necesarias y razonables para minimizar el riesgo de que la pierda a manos de otros particulares.[115] En consecuencia, las autoridades estatales están obligadas a realizar todas aquellas acciones necesarias para preservar la vida de las personas bajo su control y custodia, así como para evitar violaciones a sus derechos humanos; ya sea por otros particulares o por servidores públicos; para así, reducir las situaciones que ponen en riesgo su vida.

276. Como se ha señalado anteriormente, el derecho a la vida y el derecho a la integridad física constituyen derechos humanos fundamentales para garantizar el ejercicio de otros derechos. Motivo por el cual, en el caso específico de las personas privadas de su libertad, el Estado adopta una posición especial de garante, que se traduce en el deber de respeto y garantía de los mismos. En ese contexto, el Sistema Interamericano precisa que, el derecho a la integridad personal se encuentra reconocido en los artículos I, XXV y XXVI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en el artículo 5 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, al establecerse que toda persona tiene derecho a que se le respete su integridad física, psíquica y moral. Asimismo, señala de manera específica que, toda persona que sea privada de su libertad gozará de un tratamiento humano durante dicha privación. La protección de este derecho es tal que, la Convención Americana establece la inderogabilidad de

---

[112]Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Espinoza vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2014. Serie C. No. 289, párr. 205.
[113] CrIDH, Caso Familia Barrios Vs. Venezuela, Sentencia de 24 de noviembre de 2011, (Fondo, Reparaciones y Costas), párr. 48.
[114]Corte Interamericana de Derechos Humanos, Asunto del complejo penitenciario de Curado respecto de Brasil. Resolución de 22 de mayo de 2014, párr. 26.
[115] Tesis aislada P. LXI/2010, "Derecho a la vida. Supuestos en que se actualizará su transgresión por parte del Estado. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época, t. XXXIII, enero 2011, pág. 24.

este derecho en caso de guerra, de peligro público o de otras emergencias que amenacen la independencia o seguridad del Estado.[116]

277. Así, podemos advertir que, en el Sistema Interamericano, del cual forma parte nuestro país, no es posible suspender el goce del derecho a la integridad personal, independientemente de sus circunstancias particulares. En este sentido, en los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, se estableció la obligación del Estado consistente en proteger a éstas contra todo tipo de amenazas, actos o conductas que tengan como finalidad anular la personalidad o disminuir la capacidad física o mental de la persona.[117] Situación que cobra especial relevancia tratándose de personas privadas de su libertad, pues su resguardo y control se encuentra completamente bajo el Estado; lo que obliga a éste a adoptar medidas concretas que garanticen de manera efectiva el ejercicio pleno de este derecho.

278. AI respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que la responsabilidad del Estado, respecto a garantizar el derecho a la integridad de las personas privadas de su libertad, no se circunscribe a la obligación negativa de abstenerse de infligir un daño a dichas personas; ya que, al tener éste el control sobre la vida de las y los reclusos, sus obligaciones se amplían e incluyen establecer medidas de seguridad y control necesarias para preservar la vida e integridad personal de las personas privadas de su libertad[118]. De ahí, que el Estado deba adoptar las medidas necesarias para prevenir que las personas privadas de su libertad sean atacadas por otros reclusos. Por lo cual, dichos centros deben contar con vigilancia constante y adecuada para mantener la seguridad y el control de internos.

279. De igual manera, en el Caso Tibi *vs.* Ecuador, la Corte determinó que, el Estado tiene además el deber de investigar, sancionar y reparar toda violación a este derecho cometido en perjuicio de las personas que se encuentran bajo su custodia. Por lo cual, debe de iniciar de oficio y de manera inmediata una investigación efectiva que permita identificar, juzgar y sancionar a los responsables de dichas agresiones.

280. En ese entendido, “el Estado es responsable de la observancia del derecho a la vida de toda persona bajo su custodia en su condición de garante de los derechos consagrados en la Convención Americana. Como lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, si bien el Estado tiene el derecho y la obligación de garantizar su seguridad y mantener el orden público, su poder no es ilimitado, pues tiene el deber, en todo momento, de aplicar procedimientos conforme a Derecho y respetuosos de los derechos fundamentales, a todo individuo que se encuentre bajo su jurisdicción”.[119]Por ende, “el Estado como garante de este derecho le impone la prevención en aquellas situaciones -como ahora en el *sub judice*- que pudieran conducir, incluso por acción u omisión, a la supresión de la inviolabilidad del derecho a la vida. En este sentido, si una persona fuera detenida en buen estado de salud y posteriormente, muriera, recae en el Estado la obligación de proveer una explicación satisfactoria y convincente de lo sucedido y desvirtuar las alegaciones sobre su responsabilidad, mediante elementos probatorios válidos, ya que en su condición de garante el Estado tiene tanto la responsabilidad de garantizar los derechos del individuo bajo su custodia como la de proveer la información y las pruebas relacionadas con el destino que ha tenido la persona detenida.”[120]

281. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 1°, párrafos primero y tercero, establecen la obligación del Estado garante, respecto de la promoción, respecto, protección y garantía de los derechos humanos, cuando señala que “todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su

---

[116]Art. 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
[117] Principio 1 de Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de la Libertad en las Américas.
[118] Comisión Interamericana de Derechos Humanos, supra nota 1, pág. 134.
[119]CrIDH, Caso Juan Humberto Sánchez Vs. Honduras, Sentencia de 7 de junio de 2003, párr. 111
[120]Ídem.

protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece."[121]Por lo que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.[122]

282. En particular, por lo que hace a las personas privadas de su libertad, el artículo 18, párrafo segundo de la Constitución Federal, establece que "el sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley."[123] En esas circunstancias, "el Estado es el garante de la seguridad de quienes se encuentren bajo su custodia en los centros penitenciarios del país."[124]

283. Actualmente, la Ley Nacional de Ejecución Penal, se encuentra armonizada a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales, pues establece que todas las personas privadas de su libertad, gozarán de todos los derechos previstos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, al señalar que "las personas privadas de su libertad en un Centro Penitenciario, durante la ejecución de la prisión preventiva o las sanciones penales impuestas, gozarán de todos los derechos previstos por la Constitución y los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, siempre y cuando estos no hubieren sido restringidos por la resolución o la sentencia, o su ejercicio fuese incompatible con el objeto de éstas. Para los efectos del párrafo anterior, se garantizarán, de manera enunciativa y no limitativa…" "[t]oda persona privada de la libertad tiene derecho a que se garantice su integridad moral, física, sexual y psicológica."[125]

284. Si bien es cierto, para la fecha en la cual **VD** fue sentenciado, la referida legislación no se encontraba vigente, la ley que regía la ejecución de su sentencia era la Ley del Sistema Penitenciario y de Ejecución de Sanciones del Estado de Zacatecas, establecía en su artículo 3° que la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, los Centros Regionales de Reinserción Social y los Establecimientos Penitenciarios, eran instituciones de seguridad pública de carácter civil, disciplinado y profesional, cuya actuación se regiría por los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, eficiencia, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas y demás disposiciones aplicables.

285. En ese contexto, correspondía la ejecución de las penas privativas y restrictivas de la libertad y la aplicación de las medidas de seguridad al Poder Ejecutivo, mientras que la modificación y duración de las mismas al Poder Judicial. Mientras que el numeral 5, establecía que uno de los principios que orientan esa ley era la gobernabilidad y seguridad institucional: la cual consistía en que la Dirección General y la Dirección del Centro respectivo establecerían las medidas necesarias para garantizar la gobernabilidad y la seguridad institucional de los Centros, **así como la seguridad de los propios internos** y del personal que labora en los mismos, de los familiares de los internos y de otros visitantes, así como de las víctimas y de las personas que viven próximos a los Centros, aunque lo anterior implique la limitación de ciertas garantías de las personas que se encuentran internas en instituciones preventivas o de cumplimiento de sanciones, siguiendo siempre los preceptos de dignidad, respeto y trato

---

[121] Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150917.pdf, fecha de consulta 21 de febrero de 2018.
[122] Ídem.
[123] Ídem.
[124]CNDH Recomendación 04/2016 de fecha 25 de febrero de 2017, párr. 29.
[125]Ley Nacional de Ejecución Penal, artículo 9.

humano estipulados en Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales, la Constitución Política del Estado Libre Soberano de Zacatecas y las leyes y reglamentos aplicables.

286. Por tanto, la ejecución de las sanciones y medidas de seguridad en todas sus modalidades, estaría sometida a la vigilancia y control judicial y se desarrollará con respeto a los derechos humanos y con sujeción a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, y las leyes y reglamentos aplicables. Debiendo ser tratada la persona privada de la libertad humanamente, con irrestricto respeto a su dignidad inherente, a su seguridad e integridad física, psicológica y moral y a sus derechos humanos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales, la Constitución Política del Estado, esta Ley y demás normas jurídicas aplicables[126].

287. Con base en lo anterior, así como en el Principio 34, del Conjunto de Principios para la Protección de todas las Personas Sometidas a Cualquier forma de Detención o Prisión[127], este Organismo inició de manera oficiosa la investigación de los hechos; constatando además, que estos mismos hechos, en cumplimiento a los instrumentos jurídicos internacionales y nacionales en cita, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas comenzó su respectiva indagatoria, tal como se acredita con las constancias de la carpeta única de investigación (...). Investigación que, por tratarse de la muerte de una persona que se encontraba bajo custodia del Estado (como en el presente caso a cargo del Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas), debe ser iniciada *ex officio* y sin dilación, además de ser seria, imparcial y efectiva, como lo indica la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando asegura:

> [E]sta investigación debe ser realizada a través de todos los medios legales disponibles para la determinación de la verdad y la investigación, enjuiciamiento y castigo de todos los responsables de los hechos, especialmente cuando están o puedan estar involucrados agentes estatales. Es pertinente destacar que el deber de investigar es una obligación de medios, y no de resultados. Sin embargo, la Corte reitera que éste debe ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa, o como una mera gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de las víctimas o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios.[128]

288. Así, en ambas investigaciones se obtuvo como dato preliminar que, el (...), aproximadamente a las 18:00 horas, personal de seguridad y custodia en compañía de personal de salud, ambos adscritos al Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas, se percataron que la persona privada de su libertad **VD** se encontraba sin vida, esto al interior de la celda 2, del bloque B, planta baja, del área del OCLADE (Área de Observación, Clasificación y Desintoxicación), misma que, como se vio en párrafos precedentes, fue su última reubicación.

289. Así las cosas, el 17 de septiembre de 2019, el Teniente Coronel **AR2SSP,** entonces Director del Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas, informó a este Organismo que **VD** había perdido la vida, refiriendo que se trató de un suicidio. Situación que en absoluto resta responsabilidad institucional del Estado, ya que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha establecido que el Estado es responsable, en su condición de garante de los derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos,

---

[126] Ley del Sistema Penitenciario y Ejecución de Sanciones del Estado de Zacatecas, artículos 7 y 15.
[127] "Si una persona detenida o presa muere o desaparece durante su detención o prisión, un juez u otra autoridad, de oficio o a instancias de un miembro de la familia de esa persona o de alguna persona que tenga conocimiento del caso,
investigará la causa de la muerte o desaparición. Cuando las circunstancias lo justifiquen, se llevará a cabo una investigación iniciada de la misma manera cuando la muerte o desaparición ocurra poco después de terminada la detención o prisión. Las conclusiones de esa investigación o el informe correspondiente serán puestos a disposición de quien lo solicite, a menos que con ello se obstaculice la instrucción de una causa penal en curso".
[128] Caso Mendoza y otros *Vs.* Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones. Sentencia de 14 de mayo de 2013. Párr. 218.

de la observancia de los derechos a la vida y a la integridad personal de todo individuo que se halla bajo su custodia[129].

290. Por su cuenta, dentro de las constancias que integran la indagatoria ministerial (...) se desprende que el día de los hechos, la Fiscalía General de Justicia tuvo conocimiento que al interior del Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas, se localizó una persona sin vida, hechos que les hizo del conocimiento la **SP21**, al referir que **VD** al parecer se había quitado la vida. Motivo por el cual se constituyeron al Centro penitenciario, en donde recabaron la entrevista con el testigo **SP5**, quien se desempeña como Policía Penitenciario, refiriendo que en esa fecha (...) él en compañía de una Enfermera de nombre **MÓNICA** acudieron al área en la cual se encontraba **VD**, esto con la finalidad de suministrarle un medicamente que estaba tomando y el cual le correspondía ingerir a las 18:00 horas, por lo que al llegar, el testigo le llamó en diversas ocasiones al PPL y al no recibir respuesta, retiró el candado que estaba sujeto a la puerta, intentó abrir la chapa de la puerta pero tenía el seguro, por lo cual ingresó la llave y al intentar abrir la puerta, ésta estaba pesada, por lo cual no podía abrirla, siguió hablándole a **VD** pero éste no respondía, por lo cual empujó la puerta con mayor fuerza, logrando abrirla un poco y al revisar al interior de la celda, observó al interno de espaldas a la puerta, como recargado y en cuclillas, además observó una agujeta enredada en el cuello, por lo cual le solicitó a la enfermera que revisara los signos vitales, siendo ella quien le comenta que carece de signos. Enseguida dio aviso a su superior jerárquico para que se realizara lo conducente.

291. Luego, del acta de inspección e identificación de cadáver, recabada por **SP22,** quien luego de describir la vestimenta del difunto, expuso que en el cuello se le apreciaba un surco por estrangulamiento y que a decir del **SP26**, las causas de muerte son por asfixia por ahorcamiento.

292. Luego, el 20 de septiembre de 2019, **SP22,** recabó la testimonial de **SP2,** quien es Enfermera adscrita al Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas, y refirió que, el día del deceso de **VD** ella en compañía de un custodio acudieron a la celda en la cual éste se encontraba, ya que le llevaba un medicamento, que el custodio tocó varias veces a la puerta y le hablaba por su nombre, pero no recibían respuesta, por lo cual el custodio abrió la puerta con su llave, pero la puerta no se abría, pues estaba obstruida, por lo cual la empujo y, al estar la puerta entreabierta observó el custodio “que **VD** se había ahorcado”, por lo que el custodio le hizo señas indicándole que el PPL se había quitado la vida, ante lo cual ella le solicitó que abriera la puerta para poder ingresar a verificar el estado de **VD**, cuando ella ingresó pudo darse cuenta que **VD** estaba en posición como sentado, recargado en la puerta, con una cuerda o agujeta atada a su cuello, le checó el pulso radial y carotideo, así como que observó las pupilas, dándose cuenta que no contaba con signos vitales.

293. Respecto a la causa de muerte de **VD** se desprende del Certificado Médico de Necropsia, con número de oficio (...), suscrito por la **SP27,** Perito Médico Legista adscrita a la Dirección General de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia, quien asentó que tuvo a la vista a las 12:30 horas del (...), el cadáver de sexo masculino, de quien en vida respondiera al nombre de **VD**, de 38 años de edad y quien a la exploración física, presentaba las siguientes lesiones: 1. Escoriación en región frontal izquierda, por arriba de la ceja de ocho por tres (8x3) milímetros. 2. Escoriación en región parietal, área descubierta de cabello, de tres por un milímetro (3x1) milímetro. 3. Escoriación en área temporal izquierda de tres por dos (3x2) milímetros. 4. Surco incompleto, único, oblicuo de treinta y ocho (38) centímetros en tercio superior del cuello, con puente sano de siete (7) centímetros, con región apergaminada de seis (6) milímetros, con su parte más angosta de tres (3) milímetros, con una profundidad de cuatro (4) milímetros. Y, concluyó que la causa de muerte de **VD** era (…).

[129] Caso Vera Vera y otra Vs. Ecuador. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de mayo de 2011. Párr. 88. Caso Mendoza y otros Vs. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones. Sentencia de 14 de mayo de 2013. Párr. 219.

294. Con la finalidad de determinar la verdad histórica de los hechos, personal adscrito a este Organismo recabó medios de prueba, entre ellos **PPL17** y **PPL18,** quienes expusieron que solo se dieron cuenta que **VD** se había quitado la vida en virtud de haber visto el movimiento generado por los custodios y, particularmente el segundo de los citados refirió que el día del deceso, aproximadamente a las 21:00 horas, un custodio entró a su celda y les dijo que **VD** se había quitado la vida y después ya no les permitieron salir.

295. Por su cuenta, **SP3**, **SP7**, **SP6, SP5, SP8, SP4** y **SP9**, personal de seguridad y custodia que laboró el día de los hechos en el Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas, en sus respectivas declaraciones rendidas ante personal adscrito a este Organismo, quienes fueron coincidentes en exponer que aproximadamente a las 18:00 horas fueron avisados de que, en el área del OCLADE **VD** se había quitado la vida, que de esto se habían enterado después de que la **ENFERMERA SP2** en compañía de **SP5**, habían acudido a la celda del occiso con la finalidad de suministrarle un medicamento, siendo la referida enfermera quien checó los signos vitales y pudo darse cuenta que estos estaban ausentes; asimismo, que les fue complicado ingresar a la celda en virtud de que el cuerpo de **VD** obstruía la entrada.

296. Resulta preocupante que ante las múltiples expresiones de temor que **VD** tenía de perder la vida, el (...), se tomara la decisión de aislarlo en una celda, la marcada con el número 2, del bloque B, en la planta baja, del OCLADE, de la cual personal adscrito a este Organismo pudo constatar que no cuenta con ninguna clase de visibilidad hacia su interior, pues se trata de una celda que consta de 4 paredes, de las cuales solo una de ellas tenía pequeñas ventanas, en la parte superior, instaladas aproximadamente a 1.80 metros por encima del nivel del piso; luego, el único acceso era por una puerta de madera, totalmente cubierta, es decir, no tenía ventana o rendija por donde pudiera ser supervisado el interno.

297. En esa misma fecha de reubicación, (...), **VD**, entre las 14:45 y las 18:02 horas, perdió la vida, lo anterior fue informado a este Organismo, tanto por el **SP1,** Juez de Ejecución de Sanciones Penales, como por el Teniente Coronel **AR2SSP,** entonces Director del Centro Penitenciario, en los cuales agregaron fotografías de las que se advierte que a las 18:20 horas, **VD** se encontraba semi-acostado, con la cabeza en alto, recargada sobre una puerta de madera, la cual estaba cerrada, su mano derecha sobre una cobija, además se apreciaban algunos objetos como utensilios de cocina y/o alimentos en el suelo, así como un colchón o colchoneta recargado en la pared.

298. Con lo anterior se advierte que, además de haberse incumplido con el deber del Estado, respecto a la reinserción social de **VD**, el Estado a través de las autoridades penitenciarias incumplieron con su obligación respecto de la seguridad, el control y la justicia, es decir, se incumplió con el principio 36 del Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, que establece que está prohibido imponer restricciones que no estén estrictamente justificadas para los fines de la detención o para evitar que se entorpezca el proceso de instrucción o la administración de justicia, o para el mantenimiento de la seguridad y el orden en el lugar de detención.

299. Finalmente, esta Comisión de Derechos Humanos reprocha al Estado, por conducto de las autoridades del sistema penitenciario, la falta de supervisión en las áreas como las asignadas en el OCLADE las cuales no cuentan con características propias de una celda, lo cual impide un control directo sobre las actividades desempeñadas en su interior, por lo cual se deben erradicar los riesgos de atentados contra la vida e integridad personal de los internos, tanto en sus relaciones entre sí como por parte de los agentes estatales y garantizar que el régimen disciplinario respete sus derechos humanos.

300. Lo anterior es así pues desde el momento en que se reubicó a **VD** en la celda 2, del bloque B, en la planta baja, del OCLADE, no volvió a tener supervisión penitenciaria, sino hasta las aproximadamente 18:02 horas, del (...), momento en el que le correspondía la ingesta de su medicamento, que la **ENFERMERA SP2** en compañía del custodio **SP3**, pudieron percatarse

del deceso de **VD**, con lo que queda plenamente acreditado que el Estado es el responsable de este hecho, por su condición de garante, vulnerando los derechos reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ya que se incumplió con la debida observancia del derecho a la integridad personal de todo individuo que se encuentra bajo su custodia, máxime que, en el presente caso, **VD** traía consigo un historial largo de agresiones hacia su persona y de referir en múltiples ocasiones el temor que tenía por perder la vida o ser dañado en su integridad personal.

301. Trasciende que, el Estado debe asegurar que toda persona privada de su libertad viva en condiciones compatibles con su dignidad humana, entre las que se encuentren, *inter alia*: a) un espacio lo suficientemente amplio para pasar la noche; b) celdas ventiladas y con acceso a luz natural; c) acceso a sanitarios y duchas limpias y con suficiente privacidad; d) alimentación y atención en salud adecuadas, oportunas y suficientes, y e) acceso a medidas educativas, laborales y de cualquier otra índole esenciales para la reforma y readaptación social de los internos[130] y en el caso de **VD**, y demás personas privadas de la libertad que se encuentran ubicados en el área del OCLADE, las celdas no cumplen con los referidos estándares, pues no cuentan con sanitario, regaderas, sin mueble para dormir o sentarse, así se aprecia de las fotografías que se adjuntaron al oficio por el cual se hizo del conocimiento a este Organismo respecto de la muerte de **VD,** visualizando únicamente algunos objetos como una cobija y utensilios de cocina.

302. En ese mismo sentido, sobre el pasillo que conduce a las habitaciones acondicionadas como celdas, ubicadas en el OCLADE (Área de Observación, Clasificación y Desintoxicación), no se cuenta con cámaras de videovigilancia a fin de tener mayor control sobre lo que sucede en esa área en particular. Pues de haber contado con ellas, pudiera haberse realizado un análisis, no solo por este Organismo, sino por la autoridad ministerial y la propia autoridad penitenciaria y tener mayor certeza de qué fue lo que sucedió el día (...), en la celda 2, del bloque B, planta baja, y de esa manera evitar realizar especulaciones respecto a la causa de muerte.

303. Entonces, la incipiente organización penitenciaria, muestra la vulneración en la que se encuentran las personas privadas de la libertad, por lo cual la autoridad a quien va dirigida la presente Recomendación, deberá realizar una investigación profunda, efectiva e imparcial, a fin de determinar la responsabilidad administrativa en que incurrió el personal adscrito al Centro Regional de Reinserción Social, pues la Corte ha sostenido que la determinación de responsabilidad penal y/o administrativa poseen, cada una, sus propias reglas sustantivas y procesales y que la falta de determinación de responsabilidad penal, en su caso, no debe impedir que se continúe con la averiguación de otros tipos de responsabilidades, tales como la administrativa[131].

304. Ahora bien, el artículo 1°, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala de manera contundente la obligación de todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, de “promover, respetar, proteger y garantizar” los derechos humanos, de conformidad con los principios de “universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad”, y se establece la obligación del Estado de “prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos”. Esto conlleva que todos los órganos del Estado, en el marco de las atribuciones que le son conferidas por la ley, están obligados a implementar programas tendentes a prevenir violaciones a los derechos humanos y garantizar que sean efectivamente respetados.

305. Finalmente, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se ha pronunciado reiteradamente y, de forma puntual en la recomendación general número 30/2017, haciendo énfasis en la necesidad del constante monitoreo de la seguridad y gobernabilidad de los centros penitenciarios; la ampliación del presupuesto para que sea suficiente y haga frente a las

---

[130] Corte IDH. Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de julio de 2006. Serie C No. 150. Párrafo 146

[131] Ibidem. Párrafo 224.

necesidades de los centros de reclusión; se incremente la plantilla del personal de seguridad y custodia y, se identifiquen a los servidores públicos que indebidamente propician o facilitan las condiciones de autogobierno y/o cogobierno y proceder contra ellos administrativa y, en su caso, penalmente.

306. Recomendación general que no ha sido cumplida y atendiendo a las reiteradas repeticiones ocurridas en los diversos Establecimientos de reclusión a cargo del Estado aún y cuando, la autoridad penitenciaria, como representante del Estado en los centros de reclusión y detención, tiene a su cargo la administración y operación del Sistema Penitenciario, basada en el respeto a los derechos humanos, supervisando que en las instalaciones de los centros, se mantenga la seguridad, tranquilidad e integridad de las personas privadas de su libertad.

VII. CONCLUSIONES DEL CASO.

A) Por lo que hace a la autoridad a quien se emite el Acuerdo de No Responsabilidad:

1. Una vez que se ha realizado el análisis de las probanzas que fueron recabadas durante el proceso de investigación, derivado de los hechos motivos de la queja presentada por **VD**, del informe rendido por el **SP1,** Juez de Ejecución de Sanciones Penales del Distrito Judicial de la Capital, adscrito al Tribunal Superior de Justicia del Estado, concatenado con las pruebas documentales que obran en el expediente se puso acreditar lo siguiente:

1.1. El marco legal que regía la ejecución de la sentencia de **VD** era Ley del Sistema Penitenciario y de Ejecución de Sanciones del Estado de Zacatecas, la cual establecía el procedimiento a seguir en tratándose de los traslados de las personas privadas de la libertad de un centro penitenciario a otro y, en el ámbito jurisdiccional, ninguna de las partes (sentenciado, defensa pública y autoridad penitenciaria) presentaron el incidente de traslado, cumpliendo las formalidades que exigía dicha ley.

1.2. En ese sentido, en cada acuerdo recaído a los diversos escritos presentados tanto por el sentenciado como por su defensora pública, el Juez de Ejecución de Sanciones, les advertía cuál era la vía a seguir para el traslado; asimismo, que de sus escritos no se desprendía petición alguna qué acordar. Llegando al extremo de destacar los requerimientos efectuados a fin de que se acataran por las partes procesales, sin que ello hiciera eco en quienes podían presentar el incidente respectivo.

1.3. Asimismo, en reiteradas ocasiones el **SP1,** Juez de Ejecución de Sanciones del Estado de Zacatecas, requirió al Director General de Prevención y Reinserción Social del Estado y al Director del Centro Regional de Reinserción Social Varonil, para que presentaran el incidente de traslado, y que en el caso de la Autoridad Penitenciaria, se podía ejecutar un traslado por caso urgente.

2. Por tanto, en atención las valoraciones realizadas en el apartado anterior, esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, con fundamento en los artículos 51 y 52 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, en relación con el numeral 161, fracción IX y 164 de su Reglamento, **RESUELVE**:

PRIMERO. Emitir Acuerdo de No Responsabilidad a favor del **SP1,** Juez de Ejecución de Sanciones del Estado de Zacatecas, adscrito al Tribunal Superior de Justicia del Estado

SEGUNDO. Notificar la presente resolución a las partes.

TERCERO. Archivar de forma definitiva el expediente CDHEZ/370/2019, por lo que hace a esta autoridad.

B) Por lo que hace a la autoridad a quien se emite Recomendación:

DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO:

- Director General de Prevención y Reinserción Social del Estado
- Director del Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas

3. Esta Comisión rechaza la vulneración de los derechos humanos de cualquier individuo, particularmente cuando se tiene una posición de garante respecto de los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Pues, en términos del artículo 5.2 de la Convención toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal y el Estado debe garantizarle el derecho a la vida y a la integridad personal[132]. En consecuencia, el Estado, como responsable de los establecimientos de detención, es el garante de estos derechos de los detenidos.

4. Por tanto, la Autoridad Penitenciaria -Dirección General de Prevención y Reinserción Social del Estado y Dirección del Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas-, tiene la obligación de garantizar su seguridad y mantener el orden público, su poder no es ilimitado, pues tiene el deber, en todo momento, de aplicar procedimientos conformes a Derecho y respetuosos de los derechos fundamentales, a todo individuo que se encuentre bajo su jurisdicción. Ya que como garante de este derecho le impone la prevención en aquellas situaciones que pudieran conducir, por acción u omisión, a la supresión de la inviolabilidad del derecho a la integridad personal, como en la especie aconteció, pues ante la obligación legal que tenía, fue omisa en ejecutar un traslado urgente, a diverso centro penitenciario, en donde **VD** pudo haber continuado cumpliendo su sentencia.

5. Luego, ante la posición especial de garante de la vida y de la integridad personal de las personas privadas de libertad en el Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas, tenía el deber de adoptar las medidas necesarias, eficientes y eficaces para proteger y garantizar el derecho a la vida y a la integridad personal de **VD** y de abstenerse, bajo cualquier circunstancia, de actuar de manera tal que se continuara vulnerando su integridad personal.

6. En este sentido, las obligaciones que ineludiblemente se debía asumir en su posición de garante, incluyen la adopción de las medidas que puedan favorecer al mantenimiento de un clima de respeto de los derechos humanos de las personas privadas de libertad entre sí, evitar las agresiones entre las personas privadas de la libertad, particularmente las cometidas en contra de **VD** y, en su caso, investigar a los agresores, reducir el hacinamiento, procurar que sus condiciones de detención fueran compatibles con su dignidad humana, proveyendo de personal capacitado y en número suficiente para asegurar el adecuado y efectivo control, custodia y vigilancia del centro.

7. Este Organismo subraya, que de acuerdo a la evidencia que obra en los expedientes que se resuelven, la autoridad penitenciaria omitió indagar sobre los hechos de maltrato y amenazas que continuamente reportaba **VD**, para garantizar su vida e integridad personal. La referida omisión género que **VD** de manera permanente se mantuviera en un estado de incertidumbre. No es desconocido para esta Comisión que para la investigación de los hechos de maltrato, la víctima debió realizar una denuncia, lo que pudo valorar poco probable, dado que no existían las garantías respecto a su seguridad por los diversos incidentes en los que se vio comprometida su integridad personal, lo que deja cuenta que no se garantizó su derecho a la integridad personal y que la autoridad omitió realizar acciones para verificar de dónde provenía la amenaza y establecer una objetiva “Valoración del Riesgo” que permitiera implementar medidas adecuadas. También, en relación al trato digno, es importante indicar que, en las diversas respuestas emitida por la autoridad penitenciaria, señalaba a **VD** como una persona “conflictiva”, lo que era una conceptualización discriminatoria y estereotipada, que dista de un trato digno y conforme a estándares de derechos humanos y, refleja que el Estado, lejos de hacerse responsable de lo que le sucedía, como garante de sus derechos, le fincaba a la

[132] Corte IDH. Caso Neira Alegría y otros Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 19 de enero de 19951. Serie C No. 20. Párrafo 60

víctima directa la responsabilidad de merecer los tratos recibidos por el resto de las personas privadas de la libertad.

8. Es importante resaltar que esta Comisión considera apremiante la adopción de una política pública en este rubro por parte de las autoridades de seguridad pública y penitenciarias que permita garantizar la no repetición de agresiones entre las personas que se encuentran en los centros de reclusión, de forma que se cuente con la debida implementación de medidas adecuadas y eficaces para tutelar su vida y su integridad personal, independientemente del área donde éstos se encuentren; asimismo, se implementen medidas de seguridad que no impliquen disminución de sus derechos a la reinserción social, evitando el hacinamiento, así como lugares o celdas con falta de ventilación y luz natural, sin cama para su reposo ni condiciones adecuadas de higiene como sanitario, regadera y lavabo, en aislamiento, lo que constituye una violación a la integridad personal de las personas privadas de la libertad. En el caso de **VD**, la propuesta de la autoridad para resolver la problemática fue el aislamiento, ello, sumado a lo anteriormente señalado, es valorado por esta Comisión como un trato cruel, el cual se magnificaba con la zozobra de saberse en riesgo, dado que la autoridad era omisa en garantizar que no se vulnerara su integridad personal, aún en aislamiento.

9. La Comisión reitera la importancia de aplicar las normas y lineamientos existentes en materia de Sistema Penitenciario y de Derechos Humanos, por lo cual, es urgente implementar programas de capacitación al personal de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social del Estado, de la Dirección del Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas, personal de seguridad y custodia, y el resto del personal Penitenciario, de forma que éstos, los apliquen de manera puntual y se prevengan violaciones a derechos humanos de las personas privadas de su libertad.

10. Además, quedó acreditado en la presente Recomendación, la violación a los derechos humanos al trato digno y a la reinserción social en agravio de **VD**, en la que se observa que las deficiencias descritas, fueron la sobrepoblación y hacinamiento en que se mantuvo, como “medida de seguridad”, lo que provocó el autogobierno.

DEL INSTITUTO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO:

- Defensora pública de **VD**

11. De igual manera, esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, reprocha que, por omisiones de autoridades y/o servidoras y servidores públicos, como la **AR3DGDP**, quien era la defensora pública en materia de ejecución de sanciones de **VD** se vean vulnerados los derechos humanos de las personas a quienes representan.

12. Lo anterior es así en virtud de que al desempeñarse como Defensora Pública en materia de ejecución de sanciones, se encontraba constreñida, según la Ley del Sistema Penitenciario y de Ejecución de Sanciones del Estado de Zacatecas y Ley del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Zacatecas, a asumir la defensa de **VD**, durante la ejecución de su sanción, esto tanto ante el Juez como ante la Administración Penitenciaria, debiendo realizar todas las gestiones necesarias con el fin de que se respetaran sus derechos humanos; sin embargo, omitió plantear el incidente de traslado a fin de que la integridad física y la vida de su defenso no estuvieran en riesgo, es decir, no planeó ante el Juez de Ejecución de Sanciones las cuestiones que de alguna forma le beneficiaban al sentenciado, tal cual lo establece el artículo 141, fracción II de la primera de la leyes en cita.

13. También fue omisa en cumplir su función de gestionar y vigilar que se aplicara en su defenso **VD**, la atención técnica interdisciplinaria adecuada para lograr la reinserción social, pues aún y cuando en múltiples ocasiones el sentenciado le hizo saber las condiciones de hacinamiento en las que vivía en el interior del Centro Regional de Reinserción Social de Cieneguillas, Zacatecas, así como la falta de actividades relacionadas con el trabajo, la

capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte, además de las múltiples ocasiones en las que fue lesionado.

14. Incluso, la referida omisión trascendió al grado que no solo se encontraba constreñida, según la fracción VIII del artículo 39 de la Ley del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Zacatecas, a solicitar el traslado del sentenciado a otro centro de reclusión para que cumpliera en su reinserción social, pero además, en el caso concreto, por que **VD** le hizo del conocimiento en múltiples ocasiones el riesgo que corría su integridad física y su vida, pudiendo ella misma percatarse de las lesiones que recibía y por lo cual temía también por su vida. Conjuntamente con ello, el Juez de Ejecución de Sanciones, **SP1**, en diversos acuerdos le refirió que, en los escritos que presentaba ella o su defenso, no se desprendía o se concretaba solicitud alguna qué acordar, por lo que les insistió que, para el traslado de **VD,** se hacía necesario se presentara el incidente, con las formalidades exigidas por la Ley del Sistema Penitenciario y de Ejecución de Sanciones del Estado de Zacatecas.

VIII. CALIDAD DE VÍCTIMA INDIRECTA:

1. La Corte Interamericana ha definido qué se entiende por “víctima” en general y qué se entiende por “víctima” *stricto sensu* dentro de un proceso contencioso.

2. La noción de “víctima” bajo derecho internacional refiere a la parte lesionada. De conformidad con reglas generales de la Responsabilidad Internacional de los Estados, la parte lesionada es aquella “cuyo derecho individual ha sido denegado o dañado por el acto ilegal internacional o que ha sido de otra manera particularmente afectado por dicho acto”. En el área de la protección internacional de derechos humanos, la parte lesionada es el individuo cuyos derechos han sido violados, es decir la parte cuyos derechos han sido conculcados generándosele un daño. A menudo también se le refiere como la “parte agraviada”. El Reglamento de la Corte Interamericana define el término “víctima” de la siguiente manera: “significa la persona cuyos derechos han sido violados de acuerdo a la sentencia proferida por la Corte”. Es decir, “víctima” es aquella cuyos derechos ya han sido determinados por la Corte habiendo establecido violaciones en su detrimento.

3. Luego, la jurisprudencia de la Corte ha expandido *rationae personae*[133] el reconocimiento de la condición de “víctima” a personas que en su jurisprudencia inicial no eran consideradas como tales. Por ejemplo, en el caso Villagrán Morales y Otros la Corte reconoció la condición de víctimas con base a derecho propio, de los familiares de los menores asesinados. La Corte reconoció en ese sentido que los familiares de dichos menores torturados y asesinados también habían sufrido en sí mismas violaciones del artículo 5 de la Convención. En el caso Villagrán Morales y Otros, la Corte Interamericana falló de la siguiente manera: “La Comisión señaló, en sus alegatos finales escritos, que las circunstancias de la muerte de las víctimas, así como la falta de actuación del Estado, habían provocado en los familiares de las mismas “angustias y también considerable temor”[134]. “La Corte debe destacar entre las conductas de los agentes estatales que intervinieron en los hechos del caso y que produjeron un impacto sobre sus familiares, la correspondiente al tratamiento que se dio a los cuerpos de los jóvenes cuyos cadáveres aparecieron en los Bosques de San Nicolás, […]. Estas personas no sólo fueron víctimas de la violencia extrema correspondiente a su eliminación física, sino que, además, sus cuerpos fueron abandonados en un paraje deshabitado, quedaron expuestos a las inclemencias del tiempo y a la acción de los animales y hubieran podido permanecer así durante varios días, si no hubieran sido encontrados fortuitamente. En el presente caso, es evidente que el tratamiento que se dio a los restos de las víctimas, que eran sagrados para sus deudos, y en particular, para sus madres, constituyó para éstas un trato cruel e inhumano.”[135]

---

[133] Por razón de la persona
[134] Villagrán Morales et al case, Series C: No 63., Sentencia del 19 de noviembre de1999, op. Cid. párr. 171.
[135] Villagrán Morales et al case, Series C: No 63., Sentencia del 19 de noviembre de 1999, op. Cid., párr. 174.

4. En el caso Bámaca Velásquez[136], la noción ampliada de *rationae persone* fue aplicada a la viuda del desaparecido. En dicha decisión, el juez Cançado Trindade señaló con referencia a la expansión de la noción de "víctima" lo siguiente: "…Así, la Corte Interamericana ha establecido correctamente que, en circunstancias como las del presente caso Bámaca Velásquez, las víctimas son tanto la persona desaparecida como sus familiares inmediatos."[137]

5. En el marco legal nacional, la Ley General de Víctimas conceptualiza en su artículo 4, a las víctimas directas e indirectas, entre otras, de la siguiente manera: "…víctimas directas aquellas personas físicas que hayan sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional, o en general cualquiera puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte. Son víctimas indirectas los familiares o aquellas personas físicas a cargo de la víctima directa que tengan una relación inmediata con ella."

6. En el estado de Zacatecas, la Ley de Atención a Víctimas establece en el ordinal 4°, párrafos segundo y tercero: "Son víctimas indirectas los familiares o aquellas personas físicas a cargo de la víctima directa que tengan una relación inmediata con ella. Para este efecto se consideran víctimas indirectas, entre otros, los siguientes: I. El cónyuge, la concubina o el concubinario; II. Las hijas e hijos de la Víctima; III. Los Padres de la Víctima, y IV. Los dependientes económicos de la Víctima."

7. En el caso particular, obran comparecencias en el expediente de queja de la señora **VI1** y **VI3**, la primera en calidad de mamá y la segunda como hermana de **VD**, en donde además señalaron que el nombre del papá de **VD** es **VI2**. Asimismo, obra la asesoría brindada a la primera de las víctimas indirectas, el 08 de agosto de 2018, en la cual proporcionó sus generales y datos de localización

8. Por lo que de acuerdo con el artículo 4° de la Ley General de Víctimas, así como del numeral 4°, de la Ley de Atención a Víctimas del Estado de Zacatecas, adquieren la calidad de víctimas indirectas de **VD**, **VI1** y **VI2**, al ser sus padres y **VI3** como su hermana, lo que propicia que sean susceptible de un impacto en su esfera psicosocial, con motivo de las posibles alteraciones en su entorno y en su vida familiar, generadas a partir de los hechos analizados en la presente Recomendación, por lo que deberán ser considerados para efectos de la determinación de la reparación integral del daño, así como la inscripción en el Registro Estatal de Víctimas.

IX. REPARACIONES

1. De conformidad con lo establecido en los artículos 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 51 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, al acreditarse una violación a los derechos humanos atribuible a un servidor público estatal, mediante la presente recomendación se busca incluir las medidas que procedan para lograr la efectiva restitución de las personas afectadas en sus derechos.

2. Dicha reparación, de conformidad con los *Principios y Directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones",* adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 2005, las violaciones de derechos humanos deben contemplar, de forma apropiada y proporcional a la gravedad de ésta, una reparación plena y efectiva en las formas siguientes: restitución, rehabilitación, satisfacción, indemnización, deber de investigar y garantías de no repetición.

---

[136]CtIADH, Caso Bámaca Velásquez, Series C No 70. Sentencia sobre Fondo,Sentencia de 25 de noviembre de 2000.
[137]Ídem, Párrafo 38

3. La Corte ha señalado que los familiares de las víctimas de violaciones de derechos humanos pueden ser, a su vez, víctimas. Ha considerado violado el derecho a la integridad psíquica y moral de los familiares de las víctimas por el sufrimiento causado por las violaciones perpetradas contra sus seres queridos y las posteriores actuaciones u omisiones de las autoridades estatales[138], por ello, es de vital importancia que las víctimas reciban la valoración médica y psicológica necesaria para determinar los daños que sufrieron como consecuencia de la vulneración a sus derechos, a través de la vulneración de los derechos de su ser querido.

A) De la indemnización.

1. La indemnización es una medida compensatoria que busca reparar los perjuicios económicamente evaluables que sean consecuencia de las violaciones a derechos humanos, ente los que se incluyen: el daño físico o mental; la pérdida de oportunidades, en particular las de empleo, educación y prestaciones sociales; los daños materiales y la pérdida de ingresos, incluido el lucro cesante; los perjuicios morales; los gastos de asistencia jurídica o de expertos, medicamentos y servicios médicos, psicológicos y sociales[139].

2. En el caso motivo de esta Recomendación, es procedente el pago de una indemnización, por las afectaciones emocionales causadas a **VI1**, **VI2** y **VI3** en su calidad de víctimas indirectas, de los acontecimientos sufridos por **VD**, quienes deberán inscribirse en el Registro Estatal de Víctimas, a fin de que tengan acceso a los servicios y al fondo de Atención previsto en la Ley de Atención a Víctimas del Estado de Zacatecas.

B) De la rehabilitación.

1. Las medidas de rehabilitación buscan reducir los padecimientos físicos y psicológicos de las víctimas, a través del otorgamiento de servicios de atención médica, psicológica, jurídica y social que éstas requieran[140].

2. En el asunto de estudio, los servicios de atención médica, psicológica, jurídica y social deberán otorgarse a **VI1**, **VI2** y **VI3**, en su calidad de víctimas indirectas, de las violaciones a derechos humanos que sufrió **VD**, sufrió mientras se encontraba persona privada de la libertad en el Centro Regional de Reinserción Social Varonil, de Cieneguillas, Zacatecas, pues, quizá, de haberse efectuado el traslado urgente, no se hubiera expuesto la integridad personal y su vida.

C) De las medidas de satisfacción.

1. Estas medidas contemplan la verificación de los hechos y la relevación de la verdad, así como aplicación de sanciones jurídicas o administrativas a los responsables de las violaciones[141]. Por lo anterior, se requiere que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado proceda a realizar la investigación administrativa que corresponda, a fin de determinar la responsabilidad y sanciones específicas del personal adscrito a la Dirección General de Prevención y Reinserción Social del Estado, y la Dirección del Centro Regional de Reinserción Social Varonil, de Cieneguillas, Zacatecas, así como del personal de seguridad y custodia, que vulneró los derechos humanos de la persona agraviada.

2. En ese mismo sentido, el Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Zacatecas, deberá iniciar la investigación administrativa correspondiente, para determinar la responsabilidad en la

---

[138]Caso López Álvarez Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de febrero de 2006. Párr. 11.
[139]Numeral 20 de los Principios y Directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, Asamblea General de las Naciones Unidas, 16 de diciembre de 2005.
[140]Ibid., Numeral 21.
[141]Numeral 22 de los Principios y Directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, Asamblea General de las Naciones Unidas, 16 de diciembre de 2005.

que incurrió la **AR3DGDP**, Defensora Pública en materia de ejecución de sanciones y determinar la sanción.

3. Asimismo, que la Fiscalía General de Justicia del Estado, a la brevedad posible, esté en condiciones de determinar la probable responsabilidad de quien o quienes ejercieron violencia física en contra de **VD**, para lo cual se integró la carpeta de investigación (...), del índice de la Agencia del Ministerio Público Número Dos, adscrito a la Fiscalía Especializada de Derechos Humanos, Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, por posibles actos de tortura.

D) Garantías de no repetición.

1. A fin de prevenir la violación de los derechos mencionados en párrafos precedentes, resulta indispensable que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas conjuntamente con la Dirección General de Prevención y Reinserción Social del Estado, diseñen e implementen rondines y medidas de vigilancia eficientes, las veinticuatro horas del día, en todas las áreas del Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas, para evitar situaciones como las acontecidas a **VD** en su estancia en dicho centro. Asimismo, es necesario que se ponga atención especial en las áreas más concurridas de la población interna, así como en pasillos de los dormitorios; por lo que, es necesario que se instalen cámaras de vigilancia en el área del OCLADE y del resto del Centro, las cuales deberán ser automáticas, modernas, funcionales, de clara resolución y con suficiente capacidad de almacenamiento que permita conservar por mayor tiempo las grabaciones realizadas.

2. Por otra parte, es indispensable la contratación de personal de seguridad y custodia suficiente y capacitado, para que se garantice la protección y seguridad de las personas privadas de la libertad de este Centro Penitenciario, tomando como punto de referencia la población existente y cómo ésta se encuentra distribuida en las diferentes áreas que lo conforman.

3. Por lo cual, es necesario que se implementen programas de capacitación en materia de derechos humanos, dirigido al personal de la Dirección de Prevención y Reinserción Social del Estado y las áreas que de él dependan, así como al Director, personal jurídico y personal de seguridad y custodia del Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas; a fin de que cumplan de manera efectiva con las obligaciones y el deber de Estado garante que tienen las autoridades en los centros de reclusión.

4. Por su parte el Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Zacatecas, deberá brindar capacitación continua a las y los Defensores Públicos en materia de ejecución de sanciones y demás Defensoras y defensores públicos con que cuente ese Instituto, en temas de derechos humanos, entre ellos el derecho a la legalidad y seguridad jurídica.

X. RECOMENDACIONES.

PRIMERA. En el plazo máximo de un mes, contado a partir de la notificación de la presente Recomendación, se inscriba en el Registro Estatal de Víctimas a **VD** (como víctima directa), así como a **VI1, VI2** y **VI3** en su calidad víctimas indirectas, al ser los padres y hermana de **VD**, quienes deberán ser localizadas en su domicilio; para garantizar que tenga un acceso oportuno y efectivo a las medidas de ayuda, asistencia, atención, acceso a la justicia y reparación integral previstas en esta Ley de Atención a Víctimas del Estado de Zacatecas.

SEGUNDA. Dentro del plazo máximo de un mes, contado a partir de la notificación de esta Recomendación, se valore y determine si las victimas indirectas requieren atención jurídica, médica, psicológica y social, debiendo incluir la atención tanatológica, relacionada con las vulneraciones a sus derechos humanos. Y de ser el caso, en un plazo de un mes, posteriores a

la realización de dicha valoración, se realicen las gestiones necesarias para que, en caso de que así lo decidan las y los agraviados, inicien su tratamiento, hasta el total restablecimiento de su salud física y mental.

TERCERA. En un plazo no mayor de un mes, contados a partir de la aceptación de la presente Recomendación, el Órgano Interno de Control o la Unidad de Asuntos Internos, de la Secretaría de Seguridad Pública, deberán iniciar las investigaciones administrativas del personal administrativo y de seguridad penitenciaria, según corresponda, con el fin de determinar la responsabilidad de las y los servidores públicos implicados en la presente recomendación, a quiénes se le atribuye la vulneración a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad a que se proteja su integridad personal, en su modalidad de integridad física, así como el derecho al trato digno y a la reinserción social, el derecho a la vida, en relación con el deber del Estado garante de las personas privadas de la libertad y, derecho a la legalidad y seguridad jurídica.

CUARTA. En un plazo no mayor de un mes, contados a partir de la aceptación de la presente Recomendación, el Órgano Interno de Control del Instituto de la Defensoría Pública del Estado, deberá iniciar la investigación administrativa de la Defensora Pública en materia de ejecución de sanciones implicada en la presente recomendación, a quién se le atribuye la vulneración al derecho a la legalidad y seguridad jurídica.

QUINTA. En un plazo máximo de seis meses, contados a partir de la aceptación de la presente Recomendación, la Secretaría de Seguridad Pública, conjuntamente con la Dirección General de Prevención y Reinserción Social del Estado, deberán implementar mecanismos que eviten que el Estado incumpla con su posición garante, respecto a las personas privadas de su libertad en el Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas. Para lo cual, se deberán tomar las medidas pertinentes para garantizar que todas las áreas del Centro, particularmente en el área del OCLADE (Área de Observación, Clasificación y Desintoxicación), cuenten con cámaras de videovigilancia en óptimo funcionamiento, a fin de monitorear las actividades que se generen en esas áreas; asimismo, se deberá incrementar la vigilancia y el número de rondines al interior del Centro, en especial, en aquellas áreas donde se encuentren internos aislados. Lo anterior, a efecto de prevenir y detectar incidentes que pongan en riesgo la integridad y vida de las personas privadas de su libertad. Debiendo remitir las constancias correspondientes a este Organismo.

SEXTA. En un plazo máximo de tres meses, contado a partir de la aceptación de la presente Recomendación, se implementen programas de capacitación dirigidos al personal de la Dirección de Prevención y Reinserción Social del Estado y las áreas que dependen de él, así como al Director, personal jurídico y elementos de seguridad y custodia del Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas, en temas relativos a la protección y respeto a los derechos humanos, entre ellos derecho a la integridad personal, en su modalidad de integridad física, derecho a la vida, derecho a un trato digno y a la reinserción social, todos en relación con el deber del Estado garante de las personas privadas de su libertad; asimismo, ambas autoridades a quienes se dirige la presente Recomendación, deberán capacitar a su personal en el derecho a la legalidad y seguridad jurídica. Debiendo remitir a este Organismo protector de los derechos humanos, las constancias que acrediten su cumplimiento.

SÉPTIMA. Dentro de un plazo máximo de tres meses, contado a partir de la aceptación de esta Recomendación, las autoridades a quienes se dirige, deberán implementar una campaña de sensibilización, dirigida al personal de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social del Estado, del Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas y del Instituto de la Defensoría Pública del Estado, respectivamente, para efectos de que el ejercicio

de sus funciones sea realizada con el más estricto apego a los derechos humanos de la población penitenciaria procesada o sentenciada, para lo cual deberán remitir las constancias respectivas a este Organismo para acreditar su cumplimiento.

OCTAVA. En un plazo máximo de tres meses, contado a partir de la aceptación de esta Recomendación, las autoridades penitenciarias, deberán asegurar que toda persona privada de su libertad, viva en condiciones compatibles con su dignidad humana, como son: a) un espacio lo suficientemente amplio para pasar la noche; b) celdas ventiladas y con acceso a luz natural; c) acceso a sanitarios y duchas limpias y con suficiente privacidad; d) alimentación y atención en salud adecuadas, oportunas y suficientes, y e) acceso a medidas educativas, laborales y de cualquier otra índole esenciales para la reforma y readaptación social de los internos. Asimismo, deberán diseñar e implementar programas integrales a efecto de erradicar la sobrepoblación, el hacinamiento y las condiciones de autogobierno que imperan en el Centro Regional de Reinserción Social Varonil, de Cieneguillas, Zacatecas, consolidando un sistema penitenciario eficaz y respetuoso de los derechos humanos.

NOVENA. En un plazo máximo de seis meses, contados a partir de la notificación de la presente Recomendación, se realicen los trámites correspondientes, ante las instancias competentes, a efecto de contar con el personal técnico, administrativo y profesional mínimo indispensable, para garantizar de manera eficiente y eficaz, el funcionamiento de las diferentes áreas del Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas, entre ellas el área del OCLADE (Área de Observación, Clasificación y Desintoxicación).

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 53, párrafo segundo de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, se hace del conocimiento de la autoridad a la que va dirigida esta Recomendación, que dispone de un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente en que ésta se le notifique, para que manifieste si la acepta o no, en el entendido de que, de no aceptarla, su respuesta se hará del conocimiento de la opinión pública. En caso de que la acepte, se le notifica que dispone de un plazo de 15 días, contados a partir del vencimiento del término del que disponía para responder sobre la aceptación, a fin de enviar las pruebas de su cumplimiento.

Por último, hágasele saber a los familiares del finado, el resultado de la presente recomendación y de conformidad con el artículo 61 de la Ley de este Organismo, que disponen de 30 días naturales, computados a partir de la fecha de notificación del presente documento, para que en caso de que exista inconformidad con la misma, interpongan el recurso de impugnación correspondiente ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Así lo determina y firma

_____

DRA. EN D. MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOS
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE ZACATECAS

Expediente: CDHEZ/202/2020

Tipo de queja: Oficiosa.

Persona agraviada: VD†, persona privada de su libertad en el Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo, Zacatecas.

Autoridades responsables: Personal del Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo, Zacatecas.

Derechos humanos vulnerados:

I. Derecho a la integridad personal y a la vida, en relación con el deber del Estado garante de las personas privadas de su libertad.

Zacatecas, Zac., a 09 de diciembre de 2021; una vez concluida la investigación de los hechos que motivaron el expediente CDHEZ/202/2020, y analizado el proyecto presentado por la Visitaduría Regional de Fresnillo, la suscrita aprobó, de conformidad con los artículos 4, 8 fracción VIII, 17 fracción V, 37, 51, 53 y 56 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, en relación con lo dispuesto por los numerales 27, fracción VIII, 40, 161, fracción X, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 y 175 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, la **Recomendación 54/2021**, que se dirige a la autoridad siguiente:

GENERAL ADOLFO MARÍN MARÍN, Secretario de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas, por hechos ocurridos durante la gestión del **ING. ISMAEL CAMBEROS HERNÁNDEZ**, entonces Secretario de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas.

R E S U L T A N D O;

I. DE LA CONFIDENCIALIDAD.

1. De conformidad con los artículos 6º, apartado A, fracción II y 16, párrafo segundo, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 23 y 85 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, los datos personales, así como aquellos relativos a la vida privada y familiar, permanecerán confidenciales, ya que no tienen el carácter de públicos.

2. Asimismo, en términos de lo dispuesto por el artículo 4º, párrafo sexto, 6º, fracción II, y 16 de la Convención Sobre los Derechos del Niño, los nombres, apellidos y demás datos personales de niñas y niños vinculados con los hechos de la presente resolución, se mantienen bajo la misma estricta confidencialidad, en pleno respeto a su derecho a la intimidad y vida privada.

II. RELATORÍA DE LOS HECHOS Y OBJETO DE LA CONTROVERSIA.

1. En fecha 22 de abril de 2020, un medio de circulación estatal, publicó notas periodísticas en las que, esencialmente, se informó sobre el deceso de **VD†,** quien se encontraba privado de su libertad en el Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo, Zacatecas.

En fecha 22 de abril de 2020, el Departamento de Orientación y Quejas de este Organismo, en correspondencia con lo dispuesto por el artículo 30, párrafo tercero, de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, así como en el numeral 63,

fracción V, del Reglamento que rige su actuar, inició, de manera oficiosa, queja por el deceso de **VD†**, al interior del Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo, Zacatecas, acontecido en esa misma fecha.

Por razón de turno, en esa misma fecha, se remitió el acuerdo de admisión de queja oficiosa, a la Visitaduría Regional de Fresnillo, de este Organismo, bajo el número de expediente citado al rubro, a efecto de formular el acuerdo de calificación de ésta, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 123 y 124 del Reglamento de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas.

El 22 de abril de 2020, la queja se calificó como presuntos hechos violatorios de derechos humanos.

2. Los hechos materia de la queja consistieron en lo siguiente:
En fecha 22 de abril de 2020, el diario de circulación estatal: "NTR", publicó nota periodística bajo el título: *"encuentran muerto en el Cerereso".* En dicha nota, este medio periodístico informó que, **VD†** fue encontrado sin vida en el interior del Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo, Zacatecas, donde se encontraba privado de su libertad.

3. Las autoridades involucradas, rindieron informe respectivo:
   a) En fecha 30 de abril de 2020, la **DCP1,** otrora Directora del Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo, Zacatecas, remitió informe de autoridad correspondiente.

III. COMPETENCIA.

1. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas es competente, en términos de los artículos 1º, 4º, 6º, 8º fracción VII, inciso A) y 31 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, en relación con los numerales 15, 22 y 23 de su Reglamento Interno, debido a que la queja se promueve en contra de servidores públicos de la Dirección de Prevención y Reinserción Social, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas, por hechos ocurridos en el año 2020.

2. De conformidad con el artículo 124, fracción I del Reglamento Interior de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, este Organismo advierte que, de los hechos materia de la queja, se puede presumir la violación de los derechos humanos de la parte agraviada, así como la responsabilidad por parte de los servidores públicos señalados.

3. Esta Comisión, acreditó la violación de los siguientes derechos:
   a) Derecho a la integridad personal y a la vida, en relación con el deber del Estado garante de las personas privadas de su libertad.

IV. PROCEDIMIENTO ANTE LA COMISIÓN.

Con la finalidad de documentar las presuntas violaciones a derechos humanos, así como para determinar la existencia o no de responsabilidad por parte de los servidores públicos señalados, este Organismo realizó consulta de notas periodísticas; se entrevistó a las personas relacionadas con los hechos, así como a servidores públicos que contaban con información al respecto; se recabaron comparecencias de personal de Seguridad y Custodia del Centro Regional de Reinserción Social, de Fresnillo, Zacatecas, así como de elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas; se solicitaron informes a las autoridades señaladas como responsables, así como informes en vía de colaboración; y se consultó carpeta de investigación relacionada con los hechos materia de esta Recomendación.

V. PRUEBAS.

Con base en lo estipulado en los artículos 48 y 49 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, en relación con los numerales 149, 150, 151, 152, 153, 154 y 155 del Reglamento Interior de este Organismo, durante el procedimiento realizado por esta Institución se recabaron los elementos probatorios documentales, remitidos tanto por la parte agraviada como por las autoridades señaladas como responsables, así como documentación, dictámenes e inspecciones necesarios para emitir la resolución correspondiente.

VI. SOBRE LOS DERECHOS VULNERADOS.

Violación al derecho a la integridad personal y a la vida, en relación con el deber del Estado garante.

A. De la posición del Estado como garante de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.

1. Referirse a los derechos humanos, equivale a afirmar que existen derechos fundamentales que las personas poseen por el hecho de serlo, por su propia naturaleza y dignidad; derechos que le son inherentes, y que, lejos de nacer de una concesión de la sociedad política, han de ser por ésta consagrados y garantizados.[1] Los derechos humanos aparecen pues, como un conjunto de facultades e instituciones que, en cada momento histórico, concretan las exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad humanas, las cuales deben ser reconocidas positivamente por los ordenamientos jurídicos a nivel nacional e internacional.[2] Además, debe agregarse que, la piedra angular de éstos, la constituye el principio de universalidad, el cual, ha sido reiterado en numerosos convenios, declaraciones y resoluciones de Organismos Internacionales de derechos humanos.

2. Por ejemplo, en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, celebrada en Viena, en 1993, los Estados acordaron que, con independencia de los sistemas políticos, económicos o culturales que adoptasen, tenían el ineludible deber de promover y proteger todos los derechos humanos y libertades fundamentales de sus gobernados. Motivo por el cual, es posible afirmar que, las personas que se encuentran privadas de su libertad conservan todos sus derechos humanos; desde luego, con excepción de aquellos que hayan sido restringidos temporalmente, por una disposición legal, o como consecuencia de su estado de reclusión.

3. Lo anterior, habida cuenta de que, el Estado, tiene una posición especial de garante respecto de las condiciones de reclusión de dichas personas y, por consiguiente, tiene la obligación de vigilar porque tales condiciones, sean compatibles con su dignidad humana. En ese sentido, es posible afirmar que, tal obligación, no se materializa con la mera provisión de servicios básicos, sino que debe hacerse patente mediante el establecimiento de recursos y la implementación de medidas que aseguren la tutela efectiva de los derechos humanos de las y los internos.

4. Relativo a lo anterior, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha sintetizado la importancia de dicha obligación, bajo la siguiente premisa:

> *"La proclamación de derechos sin la provisión de garantías para hacerlos valer queda en el vacío. Se convierte en una formulación estéril, que siembra expectativas y produce frustraciones. Por ello es preciso establecer las garantías que permitan reclamar el reconocimiento de los derechos, recuperarlos cuando han sido desconocidos, restablecerlos si fueron vulnerados y ponerlos en práctica cuando su ejercicio tropieza con obstáculos indebidos". [3]*

5. Con base en lo anterior, el propio Tribunal Interamericano, ha reiterado en diversas ocasiones que, la mayoría de las muertes de personas privadas de su libertad, que suceden

---

1 TRUYOL y S., Antonio, *Los derechos humanos,* Tecnos, Madrid, 1979, pág. 6

2 PÉREZ L., Antonio, *Derechos humanos, Estado de Derecho y Constitución,* Tecnos, Madrid, 1984, pág. 84.

3 CIDH, *El acceso a la justicia como garantía de los derechos económicos, sociales y culturales. Estudio de los estándares fijados por el sistema interamericano de derechos humanos*, OE A/Ser.L/V/II .129 Doc. 4, cidh/oea, 7 de septiembre de 2007, párr. 183, disponible en: http://cidh.org/pdf%20files/acceso%20a%20la%justicia%desc.pdf

al interior de los centros penitenciarios de la región, guardan estrecha relación con las condiciones de violencia interna, resultante de la falta de prevención y atención oportuna de las autoridades penitenciarias. En tanto que, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias, ha señalado que, las autoridades mexicanas, no han abordado de manera adecuada el problema de autogobierno en los centros de reclusión, e incluso, se mantienen al margen del asunto, ya sea por temor o por complicidad[4].

6. Tal problemática, visibilizada por dichas instancias internacionales, ha sido también evidenciada por este Organismo Autónomo en los últimos años, emitiendo al respecto las Recomendaciones: **06/2017, 02/2018, 03/2018, 06/2018, 16/2018, 18/2018, 21/2018, 05/2019, 08/2019,12/2019** y **15/2019**; así como **03/2020, 04/2020, 06/20 07/2020** y **11/2020**, en las cuales se demostró que, en general, por parte de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas, persiste, la omisión de brindar una adecuada protección a la integridad personal y a la vida de las personas privadas de su libertad; lo cual, ha desencadenado en muchas ocasiones, actos violentos que llevaron a la pérdida de vida de personas privadas de la libertad, a causa de agresiones cometidas por otros internos, cuyas lesiones fueron infligidas con armas punzocortantes presuntamente fabricadas o ingresadas al interior de dichos centros penitenciarios; o bien, convergen circunstancias que han orillado de manera lamentable, a que los propios internos terminen con su vida.[5]

7. Así las cosas, recordando el derecho a la vida es aquel *"respecto del cual no se autoriza suspensión alguna, ni siquiera en situaciones excepcionales"*[6]; mientras que, el derecho a la integridad personal *"es aquél que tiene todo sujeto para no sufrir tratos que afecten su estructura corporal, sea física, fisiológica o psicológica, o cualquier otra alteración en el organismo que deje huella temporal o permanente, que cause dolor o sufrimiento grave con motivo de la injerencia o actividad dolosa o culposa de un tercero"*[7], puede concluirse que, desde la perspectiva de los derechos humanos, las personas internas deben recibir el mismo respeto a su dignidad humana que aquél que deben recibir las personas en libertad.

8. Por consiguiente, este Organismo Autónomo, tal como lo ha sustentado en los documentos recomendatorios precitados, y en concordancia con la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sostiene que, **la reclusión no tiene que imponer mayores restricciones al disfrute de los derechos humanos que las que devienen de la propia privación de la libertad.** Motivo por el cual, la vida, e integridad moral, física, sexual y psicológica de todas las personas internas, deberá ser salvaguardada por la autoridad penitenciaria de forma reforzada, garantizando, manteniendo y, en su caso, restableciendo el orden y la paz dentro de los establecimientos carcelarios, utilizando para ello los protocolos aplicables, y con apoyo de las herramientas, los mecanismos y el equipo necesarios disponibles para el cumplimiento de sus atribuciones.

9. Bajo ese contexto, atendiendo a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el entendido de que para establecer que se ha producido una violación al derecho a la vida, no se requiere determinar la culpabilidad de sus autores o su intencionalidad, y tampoco es preciso identificar individualmente a los agentes a quienes se atribuyen los hechos violatorios, ya que resulta suficiente demostrar que se han verificado acciones u omisiones, que hayan permitido la perpetración de esas violaciones, o que exista una obligación del Estado que haya sido incumplida; resultó factible que esta Comisión conociera de los hechos en que perdiera la vida **VD†**, habida cuenta de que su muerte, ocurrió dentro de las instalaciones del Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo, Zacatecas, mientras se encontraba bajo la custodia del Estado.

10. Lo anterior significa que, no obstante que este Organismo Estatal recopiló evidencias que hacen posible presumir que, la causa de muerte de **VD†** lo fue: traumatismo craneoencefálico, según se desprende de la necropsia practicada a su cadáver y que obra

---

4 Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, *Propuesta General 1/2018, La ejecución penal desde los derechos humanos,* pág. 42.

5 Específicamente, en los hechos que motivaron la Recomendación derivada del expediente CDHEZ/503/2018, se acreditó que, la víctima directa, perdió la vida por asfixia por ahorcamiento.

6 Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Observación General núm. 6. Derecho a la vida, HRI/GEN/1/ Rev.9, aprobada en el 16º periodo de sesiones, 30 de abril de 1982, párr. 1.

7 Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Recomendación 69/2016, de fecha 28 de diciembre de 2016.

en autos de la carpeta de investigación número (…), originada con motivo de los hechos que aquí se dilucidan y a cargo de la, Fiscal del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en la Investigación de Homicidios Dolosos III, del Distrito Judicial de Zacatecas; nuestra intervención es posible en virtud a la competencia para investigar las posibles violaciones a derechos humanos, atribuidas a autoridades estatales y municipales, ya sea que tales violaciones sean por acción o por omisión.

11. Motivo por el cual, en el caso de análisis, se procede primeramente a establecer la obligación del Estado, como garante de los derechos de las personas privadas de su libertad, para, enseguida, realizar el estudio detallado del derecho a la vida y del derecho a la integridad personal, conculcados en perjuicio de **VD†**. En otros términos, toda vez que la muerte de **VD†**, puede representar por omisión, una vulneración a su derecho a la vida y a su integridad personal, su deceso se estima atribuible, indirectamente, al personal de seguridad y custodia del Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo, Zacatecas, en virtud a que, en su calidad de servidores públicos representantes del Estado, su obligación consiste en garantizar los derechos humanos de todas las personas internas bajo su custodia, incluido desde luego, el derecho a la vida, con base a los argumentos hasta aquí expuestos.

12. En ese entendido, debemos partir de qué significa el término "garante". Para ello, es dable decir que, la raíz etimológica de dicho término proviene del vocablo francés *"garant"* que, a su vez, viene de la palabra germánica *"Warren"*, que significa: *"hacerse responsable, asegurar"*. En términos legales, la figura del garante se configura por aquel que se compromete a responder por otra persona[8]. Persona con la obligación jurídica de garantizar un derecho a un titular[9]. Entonces pues, frente a las personas privadas de libertad, el Estado se encuentra en una posición especial, reforzada, de garante, toda vez que las autoridades […] ejercen un fuerte control o dominio, frente a las personas que se encuentran bajo su custodia[10].

13. Luego entonces, si retomamos el hecho de que el Estado, como responsable de los centros penitenciarios, es el garante de los derechos de las personas bajo su custodia[11], se colige que debe prevenir todas aquellas situaciones que por acción directa u omisión pudieran conducir a la supresión del derecho a la vida. Por ello, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha conminado a los Estados a proteger el derecho a la vida e integridad de las personas privadas de su libertad, tomando en consideración el constante riesgo de que puedan sufrir violaciones a sus derechos humanos, debido a la violencia carcelaria[12], misma que, conforme a los criterios del propio Tribunal Interamericano, es producida, entre otros factores, por la corrupción, el autogobierno, las disputas entre personas que viven en reclusión o bandas criminales, el consumo problemático de drogas y el hacinamiento[13].

14. Dichas circunstancias, precisan que el Estado, asegure que sus agentes ejerzan un control adecuado de la seguridad y el orden en los centros penitenciarios. Sobre dicho tópico, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes, ha sostenido que el personal penitenciario, debe ver su trabajo como una vocación más que como una mera actividad de subsistencia; pues si eso sucede, se generarán condiciones diferentes de interacción y disminuirán los incidentes de violencia. Inclusive, ha señalado que el profesionalismo del personal requiere que sean capaces de tratar con las personas privadas de la libertad de forma decente y humana, mientras pone atención a los asuntos de seguridad y orden[14].

15. En dicha tónica, en materia de muertes de personas internas, el Estado se encuentra obligado a prevenirlas y a responder por ellas[15]. Con relación a ello, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias ha sostenido

---

8 Obtenido de: http://conceptodefinicion./d/

9 Obtenido de: http://popjuris.com/dicionario/definicion-de/garante/

10 Corte IDH, Caso *Instituto de Reeducación del Menor* Vs. Paraguay. Sentencia de 2 de septiembre de 2004 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), párr.152.

11 Corte IDH, *Personas privadas de libertad*, San José, Corte idh/danida (Cuadernillo de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, núm. 9), s. a., pág. 5.

12 Corte IDH, *Informe sobre los derechos humanos de las personas privadas de libertad en las Américas*, *doc. cit.*, párr. 270.

13 Corte IDH, *Asunto de las Penitenciarías de Mendoza respecto Argentina*, medidas provisionales, resolución del 18 de junio de 2005, p. 18, resolutivo 1.

14 Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes, *11 Informe general de actividades*, Consejo de Europa, CPT/Inf (2001) 16, párr. 26.

15 Asamblea General de las Naciones Unidas, *Ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias. Nota del Secretario General*, A/61/311, 5 de septiembre de 2006, párr. 50.

que, aunque la muerte no sea producida directamente por la acción del Estado, como en el caso sucedió, en principio de cuentas se presume su responsabilidad[16], bajo la premisa que se le exige un nivel más elevado y reforzado de protección, debido a que estas personas se encuentran limitadas de la libertad y consecuentemente, en su capacidad de autoprotección, dependiendo para ello completamente de la autoridad penitenciaria[17].

16. En consecuencia, una vez que el deceso de una persona privada de la libertad ha ocurrido, el Estado debe actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar los actos que se sospeche fueron cometidos por personas o entidades privadas.[18] Pues en caso contrario, podría incurrir en responsabilidad; lo cual, es imperativo en los casos de suicidios y homicidios ocurridos dentro de las cárceles y centros penitenciarios bajo su jurisdicción. Motivo por el cual, se reitera, la obligación de este Organismo, en la especie, consiste en investigar la responsabilidad de las autoridades involucradas, en la vulneración del derecho a la vida e integridad personal de **VD†**, interno que, en fecha 19 de marzo de 2020, ingresó al Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo, Zacatecas, lugar donde falleció el 21 de abril de 2020.

B. Del derecho a la vida.

17. Este Organismo Constitucional Autónomo, ha reiterado que, el derecho a la vida ocupa un lugar especial en la lista de los derechos fundamentales de la persona[19]. Tanto así que, pese a que la Doctrina afirma que todos los derechos humanos tienen igual valor[20], a la hora de examinar casos concretos de violaciones de este derecho, los Organismos Internacionales y Regionales competentes, no ponen en tela de juicio, la necesidad de destacar el carácter especial del derecho a la vida.

18. Bajo tal perspectiva, el derecho a la vida se estima como prerrequisito para el disfrute de todos los demás derechos humanos.[21] Dicho en otros términos, es un derecho fundamental, esencial, sin el cual resulta imposible el disfrute de otros derechos o libertades, pues éstos, carecerían de sentido ante la desaparición de la persona titular del derecho; por ello, el derecho a la vida, como inseparable de toda persona, involucra que nadie puede ser privado de la vida de forma arbitraria. Dicho derecho, se encuentra reconocido en diversos instrumentos internacionales y regionales, firmados y ratificados por el Estado Mexicano[22].

19. De este modo, mediante su Observación General sobre el artículo 6, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Comité de Derechos Humanos, calificó al derecho a la vida como: *"el derecho supremo respecto del cual no se autoriza suspensión alguna, ni siquiera en situaciones que pongan en peligro la vida de la nación".*[23] Aunado a ello, en un caso relativo a la pena de muerte, analizado en 1993, el propio Comité, sostuvo lo siguiente:

> *"El punto de partida de un examen de esta cuestión debe ser la obligación el Estado parte (…) de garantizar los derechos reconocidos en el Pacto a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción. El derecho a la vida es el más esencial de estos derechos"*.[24]

20. A partir de entonces, el Comité ha reiterado en sus resoluciones, de manera textual, que: *"El derecho a la vida es el más esencial de estos derechos"*[25]. Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, utilizando un lenguaje más sutil y cuidadoso en los

---

16 Ídem, párr. 53.

17 Corte IDH, *Informe sobre los derechos humanos de las personas privadas de libertad en las Américas*, *doc. cit.*, párr. 53.

18 Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Observación General núm. 31. Naturaleza de la obligación jurídica general impuesta a los Estados Partes en el Pacto, CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, aprobada en el 80º periodo de sesiones, 29 de marzo de 2004, párr. 8.

19 Ver, por ejemplo, las Recomendaciones recaídas a los expedientes CDHEZ/325/2018, CDHEZ/454/2018 y CDHEZ/509/2018.

20 Ver, por ejemplo, el siguiente pasaje de la Declaración de Viena, adoptado por la segunda Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos, celebrada en Viena en 1993: *"Todos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes y están relacionados entre sí. La comunidad debe tratar los derechos humanos en forma global de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y dándoles a todos la misma importancia."* (párr. 5).

21 Corte IDH, *Caso Espinoza González* vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2014. Serie C. No. 289, párr. 205.

22 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, art. 133. "Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de las entidades federativas.

23 Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Observación General No. 6, párr. 1 (1982).

24 Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, *Caso Kindler* vs. Canadá, párr. 13.1 (énfasis agregado).

25 Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, *Caso A.R.J.* vs. Australia, párr. 6.8 (1997); G.T. c. Australia, párr. 8.1 (1998).

casos en que ha abordado dicho tópico, sostuvo, en la Opinión Consultiva 16/99, que: "*Si el debido proceso legal, con su conjunto de derechos y garantías, debe ser respetado en cualesquiera circunstancias, su observancia es aún más importante cuando se halle en juego el supremo bien que reconocen y protegen todas las declaraciones y tratados de derechos humanos: la vida humana".*[26]

21. Mientras tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, también ha reconocido de manera enfática el carácter especial del derecho a la vida. En una decisión, adoptada en 1996, sostuvo lo siguiente:

> *"(…) la Comisión Interamericana de Derechos Humanos debe destacar (…) que el derecho a la vida entendido como un derecho fundamental de la persona humana consagrado en la Declaración Americana y en diversos instrumentos internacionales a escala regional y universal, tiene el estatus de jus-cogens."*[27]

22. Asimismo, la Comisión explicó que, el concepto de *juscogens*, "*se deriva de un orden superior de normas establecidas en tiempos antiguos y que no pueden ser contravenidas por las leyes del hombre o de las naciones."* [28] En adición a lo anterior, este Organismo destaca el hecho de que, en una decisión más reciente, la Comisión Interamericana precisó que: "*El derecho a la vida es ampliamente reconocido como el derecho supremo del ser humano y conditio sine qua non para el goce de todos los demás derechos."*[29]

23. El derecho a la vida se encuentra reconocido, en el ámbito universal, por el artículo 3°, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y por el numeral 6.1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Instrumentos que establecen de forma genérica que toda persona tiene derecho a la vida, sin condicionar este derecho a si la persona se encuentra o no privada de su libertad. Aunado a ello, el Comité de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, resolvió, a través de la Observación General número 6, que el derecho a la vida es un derecho supremo respecto del cual, no se autoriza suspensión alguna. Dado su carácter inviolable, el derecho a la vida forma parte del *iuscogens*[30] y conforma un núcleo inderogable, al encontrarse consagrado como uno de los derechos que no admiten suspensión en casos de guerra, peligro público u otras amenazas a la independencia o seguridad de los Estados[31].

24. Por otro lado, en contexto regional, el derecho a la vida se encuentra previsto en el artículo 1°, de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, así como en el artículo 4°, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en términos similares a los señalados en el párrafo anterior. Adicionalmente, los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, establecen que, el respeto al derecho a la protección de la vida, no puede ser objeto de suspensión alguna.

25. Correlativamente, en el marco jurídico interno, el derecho a la vida se encuentra consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyas normas se encaminan a reconocer la conservación y la protección de la vida humana. Lo cual, ha sido sustentado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tras el análisis integral y extensivo de lo estipulado por los artículos 1°, 14 y 22 constitucionales, de los cuales, sostuvo nuestro Máximo Tribunal, se desprende la protección de este derecho[32].

26. En esa tónica, es factible concluir que, las obligaciones del Estado, respecto de la garantía del respeto a la vida, se clasifican de la siguiente manera:

---

26 Corte IDH, Opinión Consultiva OC-16/99, párr. 135.

27 Oficina en México, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Escuela de Graduados en Administración Pública y Política Pública, México, D.F., septiembre de 2007, pág. 100.

28 Corte IDH, *Caso Remolcadora* 13 de marzo, párr. 79 (1996). Ver también Sequieras Mangas c. Nicaragua, párr. 145. (1997). La CIDH hace una exégesis de la relación y las diferencias entre los conceptos de derecho consuetudinario y de *jus cogens* en los párrafos 43 a 50 de su decisión en el C*aso Domínguez* vs. Estados Unidos (2002).

29 Corte IDH, *Caso Edwards* y otros vs. Bahamas, párr. 109 (2001).

30 Corte IDH. Informe No. 47/96, Caso 11.436: Caso *Victimas del Barco Remolcador "13 de marzo"* vs Cuba, 16 de octubre de 1996, párr.79.

31 Corte IDH. *Caso Galdeón García* vs Perú. Sentencia de 6 de abril de 2006. Serie C. No.147, párr. 32.

32 Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tesis jurisprudencial 13/2002: DERECHO A LA VIDA, SU PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Febrero de 2002, pág. 589.

> a) Negativas: implican una abstención, un “no hacer” o una no intervención y,
> b) Positivas: requieren de un “hacer” por parte del Estado; esto es, de la adopción e implementación de medidas, a través de sus diversas instituciones y agentes, para su debido cumplimiento; es decir, para proteger y preservar la vida, garantizando el pleno y libre ejercicio de los derechos de todas las personas bajo su jurisdicción.[33]

27. De esta manera, en lo concerniente al derecho a la vida, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al pronunciarse sobre su garantía, ha sostenido que:

> *“…no solo presupone que ninguna persona sea privada de su vida arbitrariamente (obligación negativa), sino que además requiere, a la luz de su obligación de garantizar el pleno y libre ejercicio de los derechos humanos, que los Estados adopten todas las medidas apropiadas para proteger y preservar el derecho a la vida (obligación positiva), de quienes se encuentren bajo su jurisdicción. Esta protección activa del derecho a la vida por parte del Estado no solo involucra a sus legisladores, sino a toda institución estatal y a quienes deben resguardar la seguridad, sean éstas, fuerzas de policía o sus fuerzas armadas”[34].*

28. En ese entendido, este Organismo considera que, cuando existe una omisión de salvaguardar la vida de personas detenidas bajo la custodia del Estado, por falta de vigilancia de las autoridades penitenciarias, se actualiza el incumplimiento de su deber reforzado de cuidado, en su calidad de garante. Es decir, en lo que concierne al derecho a la vida de las personas privadas de su libertad, el Estado se encuentra en una posición especial de garante, motivo por el cual, su obligación de salvaguardar este derecho es aún mayor, por lo que debe asegurarse de proporcionar condiciones mínimas que sean compatibles con el respeto a la dignidad humana. Consecuentemente, el Estado tiene el deber de prevenir todas aquellas situaciones que pudieran conducir, por acción o por omisión, a la supresión de dicho derecho. [35]

29. En cuanto al deber del Estado, como garante de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad, este Organismo considera oportuno puntualizar que, la jurisprudencia universal e interamericana, también reconoce la **responsabilidad del Estado por omisión** debido a la desprotección de los presos y la inatención a sus necesidades básicas. Una de las primeras decisiones al respecto, ampliamente citada en la jurisprudencia posterior, es la emitida por el Comité de Derechos Humanos en el caso *Dermit vs. Uruguay*.

30. En ese caso, luego de 8 años de prisión, y cuando estaba a punto de obtener su libertad para establecer su residencia en un país de asilo, la víctima murió repentinamente en su celda. **El Estado alegó suicidio** y proporcionó al Comité una copia de la autopsia, **pero no explicó las circunstancias de la muerte,** las cuales, por lo visto, no fueron objeto de una investigación. El denunciante, un pariente de la víctima, presentó evidencias de que la hipótesis de suicidio era inverosímil. El Comité consideró al Estado responsable por la muerte, independientemente de que hubiera sido homicidio o suicidio, justificando su decisión de la siguiente manera:

> *“(…) si bien el Comité no puede llegar a una conclusión definitiva sobre si Hugo Dermis cometió suicidio, fue impulsado a cometerlo o fue muerto de otro modo mientras estaba encarcelado,* ***la conclusión ineludible es que, en cualquier circunstancia, las autoridades uruguayas fueron responsables, por acción u omisión, de no haber adoptado medidas adecuadas para proteger su vida*** *conforme exige el párrafo 1 del artículo 6 del Pacto”.*[36]

Las negritas, son de esta Comisión.

---

33 Corte IDH. Caso Myma Mack Chang vs. Guatemala. Fondo. Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2003, párr.153.

34 Corte IDH. *Caso Vargas Areco* vs. Paraguay. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C. No. 155 párr. 75..

35 Corte IDH. Informe sobre los derechos humanos de las personas privadas de libertad en las Américas. OEA, aprobado por la Corte IDH, el 31 de diciembre de 2011, párr. 270.

36 Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, *Caso Dermit* vs. Uruguay, párr. 9.2.

31. Con base en lo hasta aquí expuesto, es posible advertir que, el Estado estará obligado a rendir cuentas del tratamiento dado a la persona que falleció bajo su custodia[37]. Ya que, cuando una persona es detenida en un estado óptimo de salud, o en condiciones que no impliquen un riesgo inminente a su vida y, con posterioridad muere por causas distintas, incluyendo el suicidio o el descuido de la persona a la que se encomendó su vigilancia, recae en el Estado, el deber de brindar una respuesta satisfactoria y convincente de lo acontecido. Y, en su caso, desvirtuar las alegaciones sobre su responsabilidad, mediante medios de convicción válidos; tomando en cuenta que existe una presunción de responsabilidad estatal sobre lo que ocurra a una persona bajo custodia del Estado.

32. Se colige entonces que, según lo disponen los ordenamientos jurídicos precitados, el Estado, en su posición de garante de los derechos fundamentales de sus gobernados, está obligado a adoptar las medidas necesarias para proteger y garantizar el derecho a la vida de las personas que se encuentran recluidas en algún centro de detención. Pues no debe soslayarse el hecho de que, la muerte de personas privadas de libertad en centros de reclusión o espacios de detención temporal es consecuencia de la falta de prevención y adopción de las medidas adecuadas para mitigar una situación de riesgo o amenaza. Motivo por el cual, deberán implementarse las acciones preventivas necesarias para evitar que, por acción u omisión, se suprima este derecho.

33. Con relación a tales medidas, el Tribunal Interamericano ha determinado que, para proteger y garantizar el derecho a la vida de las personas privadas de la libertad, éstas abarcan desde aquéllas que favorecen la conservación de un clima de respeto a los derechos humanos, hasta aquellas dirigidas a proteger a los internos de la violencia que pueda suscitarse entre ellos. Pues dichos actos de violencia representan una situación de riesgo inminente tanto para la vida de las personas recluidas, como para la de cualquier persona que se encuentre en dichos establecimientos. Por lo tanto, el Estado debe tener la capacidad de mantener el orden y la seguridad al interior de los centros penitenciarios y así, garantizar la seguridad de las y los internos en todo momento, así como de las personas que los visitan y de las propias que laboran en ellos.

34. En línea con lo anterior, en el contexto interno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ha pronunciado sobre el deber del Estado como garante de los derechos de las personas privadas de su libertad, y ha sostenido que*: "además de la prohibición a la privación de la vida, el Estado tiene la obligación en el ámbito legislativo, judicial y administrativo de adoptar medidas positivas para preservar la existencia, por lo que se considera transgresión al derecho a la vida no sólo cuando una persona es privada de ésta, sino también cuando se omite adoptar las medidas aludidas para preservarla o para minimizar el riesgo de que la pierda a manos del Estado o de otros particulares*.[38]

35. Bajo ese entendido, se advierte que las autoridades estatales, están obligadas a realizar todas aquellas acciones necesarias para garantizar y preservar la vida de las personas bajo su control, cuidado y custodia. Por tanto, el Estado se encuentra compelido a prevenir de manera razonable aquellas situaciones de riesgo que pudieran conducir, aún por omisión, a la supresión de la inviolabilidad del derecho a la vida; ya sea por otros particulares o por servidores públicos.

C. Del derecho a la integridad personal.

36. Esta Comisión Estatal, asume como suyo el criterio sustentado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el sentido de que, el derecho a la integridad personal, es aquél que tiene todo sujeto para no sufrir tratos que afecten su estructura corporal, sea física, fisiológica o psicológica, o cualquier otra alteración en el organismo que deje huella temporal o permanente, que cause dolor o sufrimiento grave con motivo de la injerencia o actividad dolosa o culposa de un tercero. Dicho criterio, fue asumido por el Organismo Nacional,

---

37 Corte IDH. Informe sobre los derechos humanos de las personas privadas de libertad en las Américas. OEA, aprobado por la CIDH, el 31 de diciembre de 2011, párr. 270: Corte IDH. Caso Cárcel de Urso Branco respecto Brasil. Medidas Provisionales. Resolución del 18 de junio de 2002, Considerando 8; European Court of Human Rigths. Case of Salman v Turkey. Application 21986//93. Judgment of june 27, 2000. Grand Chamber.

38 Tesis aislada P. LXI/2010, Derecho a la vida. Supuestos en que se actualizará su transgresión por parte del Estado. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época, t. XXXIII, enero 2011, pág. 24.

mediante el contenido de la Recomendación 69/2016, de fecha 28 de diciembre de 2016 y es compartido por este Organismo Autónomo, debido a que abarca aspectos relacionados con el derecho a la integridad y a la dignidad de la persona.

37. Motivo por el cual, es oportuno enfatizar que, a pesar de que ni la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ni la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, o el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconocen expresamente el derecho a la integridad personal como tal; es evidente que la integridad personal es el bien jurídico cuya protección constituye el fin y objetivo principal de la prohibición de tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanas o degradantes, previstas en el artículo 5, de la Declaración Universal y 7 del Pacto. Por lo tanto, si relacionamos las disposiciones anteriores, con el contenido del artículo 3°, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que establece que, todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona; se puede inferir que, de dicho precepto, se desprende que la obligación de velar por el respeto y garantía de los derechos humanos corresponde al Estado, como ente garante de éstos.

38. Por su lado, la Declaración Americana de Derechos Humanos, no sólo carece de una disposición que reconozca el derecho a la integridad personal, sino que también adolece de una prohibición expresa de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. No obstante, como ya se indicó en líneas precedentes, su primer artículo consagra el derecho de toda persona a la vida, la libertad y a la seguridad de su persona. Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que el concepto de seguridad personal comprende la integridad personal, a guisa de ejemplo, conviene citar el siguiente razonamiento:

> *"(…) que la tortura física o moral no se justifica en modo alguno, por ser atentatoria contra la dignidad humana y viola la integridad de la persona, cuya defensa está consagrada en el artículo 1 de la Declaración Americana".*[39]

39. En tanto que, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sí consagra expresamente el derecho a la integridad personal y hace un aporte valioso a la definición de su contenido, al precisar que comprende la integridad física, psíquica y moral, mediante el texto del artículo 5.1. Aunado a ello, el derecho a la integridad, la prohibición de tortura y los derechos de los reclusos a un trato digno y humano están plasmados en distintos párrafos del artículo 5 de la mencionada Convención. Y, como resultado de lo anterior, mediante el precepto 1.1 dicho instrumento compromete a los Estados a asumir el compromiso de respetar los derechos y libertades reconocidos en ella, así como de garantizar su libre y pleno ejercicio, a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna.

40. Dichas obligaciones generales de respeto y garantía de los derechos humanos, vinculantes para el Estado con respecto a toda persona, implican para éste un mayor nivel de compromiso al tratarse de personas en situación de riesgo o vulnerabilidad.[40]Tan es así que, aunado a las normas que tutelan la integridad de toda persona, la normativa internacional establece otras que tienen el objetivo de proteger la integridad de las personas privadas de libertad. De esta manera, el párrafo 2 del artículo XXV de la Declaración Americana, el párrafo 1 del artículo 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el párrafo 2 del artículo 5 de la Convención Americana consagran el derecho genérico a un trato humano, lo que se traduce un trato respetuoso de la dignidad de la persona humana. Los dos tratados también contienen normas más específicas relativas al trato de distintas categorías de reclusos, en particular la separación de reclusos según su condición jurídica, sexo y edad, y la rehabilitación de reos condenados.

41. Lo anterior, significa que, mientras que el derecho genérico a un trato humano es reconocido en cuanto derecho de toda persona privada de libertad, las demás disposiciones sobre el trato de reclusos son derechos propios de personas privadas de libertad por motivos de índole penal. En lo atinente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos al resolver el

---

39 CIDH, *Diez años de actividades*, pp. 337. Véase también el informe de la CIDH sobre la situación de los solicitantes de asilo en Canadá, infra.

40 CIDH, Informe sobre los derechos humanos de las personas privadas de libertad en la Américas, párr. 46.

caso “Loayza Tamayo”, citó una sentencia de la Corte Europea, y manifestó su acuerdo con la conclusión de dicho Tribunal, consistente en que:

> *“La infracción del derecho a la integridad física y psíquica de las personas es una clase de violación que tiene diversas connotaciones de grado y que abarca desde la tortura hasta otro tipo de vejámenes o tratos crueles, inhumanos o degradantes cuyas secuelas físicas y psíquicas varían de intensidad según los factores endógenos y exógenos que deberán ser demostrados en cada situación concreta.”* [41]

42. En ese orden de ideas, es dable señalar que, el derecho de las personas privadas de libertad a ser tratadas humanamente y con el debido respeto a la dignidad inherente a su persona, constituye el derecho cuya alegada violación origina más denuncias. En cuanto a ello, en 1992 el Comité de Derechos Humanos, adoptó una nueva Observación General sobre el artículo 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y destacó que el derecho a un trato digno y humano, no se limita a los presos, sino que se extiende a toda persona privada de libertad *“en virtud de las leyes y la autoridad del Estado”*[42]. Aunado a ello, el Comité sostuvo que el derecho a un trato digno y humano es un añadido a los demás derechos fundamentales de la persona, los cuales deben reconocerse y respetarse en la medida en que los requisitos legítimos de la privación de libertad lo permiten; motivo por el cual *“las personas privadas de libertad gozan de todos los derechos enunciados en el Pacto sin perjuicio de las restricciones inevitables en condiciones de reclusión.”* [43]

43. Por otro lado, resulta de crucial importancia, el criterio sustentado por el citado Comité, en el párrafo cuarto de la referida Observación General, en los términos siguientes:

> *“Tratar a toda persona privada de libertad con humanidad y respeto de su dignidad es una norma fundamental de aplicación universal. Por ello, tal norma, como mínimo, no puede depender de los recursos materiales disponibles en el Estado Parte. Esta norma debe aplicarse sin distinción de ningún género (…)”.* [44]

44. Asimismo, también en el ámbito universal, es destacable el criterio asumido por la Comisión de Expertos, de la Organización Mundial del Trabajo que, con relación a los derechos de las personas privadas de libertad, ha sostenido lo siguiente:

> *“Es evidente que, el hecho de que hayan sido condenados por delitos no significa que los reclusos han de ser privados de derechos que se garantizan a todos (…)”.* [45]

45. De su lado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en coincidencia con el Comité, mediante su decisión en el caso Edwards, consideró responsable al Estado no sólo del derecho de los presos a un trato humano, sino también del derecho de toda persona a la salud, consagrado por el artículo XI de la Declaración Americana de Derechos Humanos.[46] Dicho principio, ha sido reiterado y ampliado por la propia Comisión en decisiones recientes, mediante las cuales ha sustentado que: “*las normas mínimas establecidas en conformidad con los artículos [sic] 5(1) y 5(2) de la Convención (…) se aplican sin tener en cuenta la naturaleza del comportamiento por el cual la persona en cuestión ha sido encarcelada independientemente del nivel de desarrollo del Estado (…)”.* [47] Además, la Comisión también destacó la importancia del derecho a la integridad, al resolver el caso Támez contra Brasil, y sostuvo que el derecho a la integridad y al trato digno, es uno de los más importantes predicados de la responsabilidad internacional de los Estados en relación con los derechos humanos el velar por la vida y la integridad física y mental de las personas bajo su custodia.

46. Tal es el estado de vulnerabilidad e institucionalización en el que se ven colocadas las personas privadas de libertad, que los Estados han propiciado la elaboración de un número

---

41 Corte IDH, *Caso Loayza Tamayo*, párr. 57.

42 Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Observación General No. 21, que sustituy la No. 9 de 1982.

43 Ídem.

44 Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Observación General No. 21. Este principio ha sido reafirmado y aplicado por el Comité en su dictamen en el *Caso Mukunto* vs. Zambia, párr. 6.4 (1999).

45 Organización Internacional del Trabajo (OIT), Informe de Comisión de Expertos, 2001, párr. 145.

46 Corte IDH, *Caso Edwards y otros* vs. Barbados, párr. 194 (2001).

47 Corte IDH, *Caso Knights y otros* vs. Jamaica, párr. 126 (citando las decisiones de la Corte Europea en el caso Ahmed c. Australia y del Comité de Derechos Humanos en Mukong c. Camerún). Ver también Edwards c. Barbados, párr. 194.

importante de instrumentos normativos para la salvaguarda específica de sus derechos fundamentales, siendo los más relevantes: las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos de 1955 (Reglas Nelson Mandela), el Conjunto de Principios para la Protección de todas las Personas Sometidas a Cualquier forma de Detención o Prisión de 1988, los Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos de 1990, la Declaración de Arusha sobre Buenas Prácticas Penitenciarias, y las Reglas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de las Reclusas y Medidas No Privativas de la Libertad para las Mujeres Delincuentes (Reglas de Bangkok), entre otras.

47. En lo que atañe al derecho a la integridad, las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos (Nelson Mandela), el Conjunto de Principios para la Protección de todas las Personas Sometidas a Cualquier forma de Detención o Prisión y los Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos, establecen en forma genérica que, cualquier persona privada de la libertad, ya sea que se encuentre detenida, arrestada o compurgando una pena de prisión, será tratada con pleno respeto a la dignidad humana. Además, las Reglas Mandela, estipulan de manera precisa que, ningún recluso será sometido a tortura ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, además de que se velará en todo momento por la seguridad de éstos y del personal, los proveedores de servicios y los visitantes. Finalmente, en la Declaración de Arusha, sobre Buenas Prácticas Penitenciarias, se ordena respetar y proteger los derechos y la dignidad de los reclusos y garantizar el cumplimiento de las normas nacionales e internacionales que salvaguardan sus derechos fundamentales.

48. Correlativamente, el Conjunto de Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, reconocen que todas las personas privadas de su libertad que estén sujetas a la jurisdicción de un Estado deberán ser tratadas humanamente, con absoluto respeto a su dignidad personal, derechos y garantías fundamentales. De manera adicional, dicho instrumento establece la obligación del Estado consistente en proteger a éstas contra todo tipo de amenazas, actos o conductas que tengan como finalidad anular la personalidad o disminuir la capacidad física o mental de la persona.[48]

49. Así pues, con relación a la obligación del Estado como garante de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad, éste es el sujeto obligado a proteger el derecho a la vida y a la integridad personal, por lo que al ser también responsable de los establecimientos de detención, es el garante de estos derechos de los detenidos.[49] Tan es así que, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha sostenido de manera reiterada que, de las obligaciones generales de respetar y garantizar los derechos, derivan deberes especiales, determinables en función de las particulares necesidades de protección del sujeto de derecho, ya sea por su condición personal o por la situación específica en que se encuentre.[50]

50. Igualmente, la Corte ha sustentado el criterio de que, frente a las personas privadas de su libertad, el Estado se encuentra en una posición especial y reforzada de cuidado, toda vez que las autoridades penitenciarias, ejercen un fuerte control o dominio sobre las personas que se encuentran sujetas a su custodia. De este modo, se produce una relación e interacción especial de sujeción entre la persona privada de libertad y el Estado, caracterizada por la privativa intensidad con que el Estado puede regular sus derechos y obligaciones y por las circunstancias propias del encierro, en donde al recluso se le impide satisfacer por cuenta propia una serie de necesidades básicas que son esenciales para el desarrollo de una vida digna.[51]

51. Bajo dicha perspectiva, este Organismo Autónomo concluye que, cuando el Estado priva de la libertad a una persona, asume una responsabilidad especial relacionada con el respeto y la garantía de sus derechos; ya que, tanto la seguridad como la integridad de éstas, queda bajo su custodia. Por ello, uno de los principales deberes del Estado consiste en ejercer un

48 Principio 1 del Conjunto de Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de la Libertad en las Américas.

49 Corte IDH, *Caso Neira Alegría y otros* vs. Perú, Sentencia de 19 de enero de 1995, párr. 60.

50 Corte IDH, *Caso Vélez Loor* vs. Panamá, Sentencia de 23 de noviembre de 2010 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), párr. 98

51 Ídem, párr.152.

control efectivo sobre la seguridad interna de los centros penales a su cargo, pues en la medida en que sea capaz de garantizar dicho aspecto, podrá garantizar los derechos humanos de las y los reclusos.[52] Por lo tanto, si el Estado es incapaz de mantener el orden y la seguridad al interior de los centros penales, será incapaz de cumplir con el objetivo esencial de la pena privativa de libertad: la reforma y la readaptación social de las y los internos.

52. Al respecto, la Corte Interamericana ha reiterado en múltiples ocasiones que, toda restricción a los derechos humanos de las personas privadas de su libertad debe demostrar de forma fehaciente la necesidad de ésta y regular rigurosamente la limitación de que será objeto. Y, por consiguiente, ha establecido que existen derechos como la vida, la integridad, el debido proceso, entre otros, cuya limitación o restricción se encuentra proscrita, bajo el entendido de que, toda persona privada de su libertad tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con la dignidad inherente al ser humano y, por ende, el Estado debe garantizarle el derecho a la vida y a la integridad personal. Lo anterior, hace factible concluir que, el Estado, como responsable de los establecimientos de detención, es el garante de tales derechos en favor de las personas detenidas.[53]

53. Entonces pues, la privación de la libertad de una persona, cuando ha cometido un delito, tiene como único objetivo, reeducarla y reinsertarla socialmente. Motivo por el cual, el Estado debe cumplir una serie de obligaciones relacionadas con su efectiva protección, a fin de que se cumplan dichos objetivos, sin que se vulneren los demás derechos humanos que éstas poseen, sobre todo, aquellos relacionados con la salvaguarda de su vida e integridad, concluyéndose entonces que, éste, tiene la obligación de protegerlos contra actos de violencia provenientes tanto de sus propios servidores, como de los demás reos.

54. En lo atinente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se ha pronunciado sobre la necesidad de que los Estados ejerzan un control efectivo de los centros penitenciarios, a fin de garantizar en todo momento la seguridad de las y los internos, sus familiares y de los propios trabajadores que ahí laboran; puesto que, de lo contrario, se generarían situaciones de riesgo, no sólo para la integridad, sino para la propia vida de las personas que se encuentran privadas de su libertad; contraviniéndose así una de las principales obligaciones en materia de derechos humanos: su garantía. Lo cual, además, se traduciría en la imposibilidad de que las penas privativas cumplan con su objetivo de reeducación y reinserción social.

55. Adicionalmente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha señalado que la violencia carcelaria es uno de los problemas más graves que enfrentan los sistemas penitenciarios de América Latina, y comprende tanto las agresiones de los agentes del Estado contra las personas privadas de su libertad, como los actos de violencia entre internos, o de éstos contra los agentes del Estado o contra terceras personas.[54] Situación que sólo puede ser prevenida mediante la implementación de acciones concretas que, por un lado, corrijan las deficiencias que permiten el rearme de la población penitenciara y, por el otro, permitan abastecer a los centros penitenciarios de personal capacitado y en número suficiente, para asegurar el adecuado y efectivo control.

56. En el caso particular del Estado Mexicano, a partir de la reforma constitucional del año 2011, mediante el texto del artículo 1°, párrafos, primero y tercero, de la Constitución General de la República, se definió claramente la obligación del Estado garante, respecto de la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos, al indicar que *“todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.”*[55] Consecuentemente, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de

52 Ídem, págs. 3-6.

53 Corte IDH, *Caso Neira Alegría* y otros vs. Perú, Sentencia de 29 de enero de 1995, Serie C No. 20, párr. 60.

54 CIDH supra nota 1, pág. 38.

55 Ídem, art.1°.

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Por consiguiente, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.[56]

57. Luego entonces, en el marco constitucional interno, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contempla que el respeto a los derechos humanos es un pilar fundamental de nuestro sistema normativo, lo cual, desde luego abarca al sistema penitenciario, cuya finalidad es la reeducación y reinserción social de los condenados, con base en el trabajo, la educación, la salud y el deporte.[57] Así lo establece de manera particular, el texto del artículo 18, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al estipular que, dicho sistema, deberá estar organizado primordialmente, sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para éste, la educación, la salud y el deporte, factores que son considerados como medios idóneos para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley.[58] Por lo tanto, se puede concluir que, el Estado es el garante de la seguridad de quienes se encuentren bajo su custodia en los centros penitenciarios del país.[59]

58. En adición a lo anterior, es importante subrayar que, tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales, como la Ley Nacional de Ejecución Penal, establecen que todas las personas privadas de su libertad, gozarán de todos los derechos previstos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, según lo dispone el artículo 9 del ordenamiento legal invocado, al establecer que cualquier persona que se encuentre privada de su libertad en un centro penitenciario mexicano, ya sea que compurgue una pena privativa de libertad, o que se encuentre bajo medida cautelar de prisión preventiva, gozará de todos los derechos previstos por la propia Constitución y los tratados internacionales signados por México, siempre y cuando, éstos no hubieren sido restringidos por la resolución o la sentencia, o su ejercicio fuese incompatible con el objeto de éstas. Por lo tanto, debe entenderse que, toda persona privada de su libertad tiene derecho a que se garantice su integridad moral, física, sexual, psicológica y, por ende, su vida, en condiciones de dignidad. [60]

59. En ese sentido, conforme a lo dispuesto por los artículos 14, 15 fracción I; 19, fracción II y 20, fracciones V y VII de la Ley Nacional de Ejecución Penal, el Estado, a través de la autoridad penitenciaria, organizará la administración y operación del sistema penitenciario, sobre las mismas bases que prevé el señalado artículo 18, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo tanto, la autoridad penitenciaria tiene la ineludible obligación de supervisar que, en las instalaciones de los centros, se mantenga la seguridad, tranquilidad e integridad de las personas privadas de su libertad, del personal que ahí labora y de los visitantes, ejerciendo las medidas y acciones pertinentes para el buen funcionamiento de éstas.

60. Entonces pues, una de las funciones primordiales del Estado, será garantizar el respeto a los derechos humanos de todas las personas que se encuentren sujetas al régimen de custodia y vigilancia en un centro penitenciario[61]. Consecuentemente, la custodia penitenciaria será una atribución de la autoridad penitenciaria consistente en salvaguardar la vida, la integridad, la seguridad y los derechos de las personas privadas de la libertad, visitantes y personal adscrito a los centros penitenciarios y las demás instalaciones que determinen las disposiciones aplicables; así como hacer cumplir su normatividad[62]. Así como también, deberá preservar el orden y tranquilidad en el interior de los centros, evitando cualquier incidente o contingencia que ponga en riesgo la integridad física de las personas privadas de su libertad, visitas y personal de los mismos.

---

56 Ídem.

57 Ídem, art. 18.

58 Ídem.

59 Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Recomendación 04/2016 de fecha 25 de febrero de 2017, párr. 29.

60 Ley Nacional de Ejecución Penal, http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LNEP.pdf.

61 Ídem.

62 Ídem.

61. Bajo esa premisa, se advierte que, el Estado, tiene la obligación de salvaguardar los derechos de las personas privadas de su libertad, sin perjuicio de las restricciones inevitables asociadas a las condiciones de reclusión; pues, al encontrarse éstas bajo su resguardo, no hay ni puede haber ninguna razón para que éste, se sustraiga de su deber perentorio de tutelar la vida e integridad de las personas que se hallan sujetas a su control, y que carecen por sí mismas, de capacidad efectiva de autodeterminación y defensa.

62. Respecto a este tema, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que, la responsabilidad del Estado, respecto a garantizar el derecho a la integridad de las personas privadas de su libertad, no se circunscribe a la obligación negativa de abstenerse de infligirles un daño; ya que, al tener éste el control sobre la vida de las y los reclusos, sus obligaciones se amplían e incluyen establecer medidas de seguridad y control necesarias para preservar la vida e integridad personal de las personas privadas de su libertad[63]. De ahí, que el Estado deba adoptar las medidas necesarias para prevenir que las personas privadas de su libertad sean atacadas por otros reclusos, por las autoridades del centro, e, inclusive por ellos mismos. Por lo cual, dichos centros deben contar con vigilancia constante y adecuada para mantener la seguridad y el control de internos.

63. Además de lo anterior, en el Caso Tibi vs. Ecuador, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que, el Estado tiene además el deber de investigar, sancionar y reparar toda violación a este derecho cometido en perjuicio de las personas que se encuentran bajo su custodia. Por lo cual, debe de iniciar de oficio y de manera inmediata una investigación efectiva que permita identificar, juzgar y sancionar a los responsables de dichas agresiones. Por consiguiente, *"el Estado es responsable de la observancia del derecho a la vida de toda persona bajo su custodia, precisamente en su condición de garante de los derechos consagrados en la Convención Americana; ya que, como lo ha señalado este Tribunal, si bien el Estado tiene el derecho y la obligación de garantizar su seguridad y mantener el orden público, su poder no es ilimitado, pues tiene el deber, en todo momento, de aplicar procedimientos conformes a Derecho y respetuosos de los derechos fundamentales, a todo individuo que se encuentre bajo su jurisdicción".*[64]

64. En suma, este Organismo estima pertinente destacar que el Estado, como garante de los derechos fundamentales de los gobernados, tiene la obligación de prevenir aquellas situaciones que pudieran conducir, incluso por acción u omisión, a la supresión de la inviolabilidad del derecho a la vida y a la integridad personal. Lo anterior implica que, si una persona es detenida en buen estado de salud y posteriormente, muere, recae en el Estado la obligación de proveer una explicación satisfactoria y convincente de lo sucedido y desvirtuar las alegaciones sobre su responsabilidad, mediante elementos probatorios válidos, pues en su posición de garante, el Estado tiene tanto la responsabilidad de garantizar los derechos del individuo bajo su custodia, como la de proveer la información y las pruebas relacionadas con el destino que ha tenido la persona detenida.[65]

65. Bajo ese contexto, esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, hace patente una vez más su preocupación, por el hecho de que, desde el año 2016, se hayan presentado una serie de eventos violentos en los que, de manera lamentable, se han perdido vidas humanas; o bien, se ha dañado la integridad personal de los internos. Lo cual, ha acontecido en el Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas y en el de Fresnillo, al igual que en el caso que ahora nos ocupa. De modo tal que, en el informe de actividades 2020 de este Organismo, se puede verificar que, en 2016, se documentó un total de 16 incidentes, teniendo como resultado 10 internos lesionados y 6 fallecidos, en los 2 establecimientos penitenciarios. Mientras que, en 2017, tanto en el caso del Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas, como en el del Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo, Zacatecas, las cifras fueron las mismas; es decir, 10 internos resultaron lesionados y 6 perdieron la vida.

66. Aunado a eso, en el año 2018, en el Centro Regional de Reinserción Social de Cieneguillas, Zacatecas, se suscitaron 31 incidentes, mismos que trajeron como

63 Corte IDH, supra nota 1, pág. 134.

64 Corte IDH, *Caso Juan Humberto Sánchez* vs. Honduras, Sentencia de 7 de junio de 2003, párr. 111

65 Ídem.

consecuencia 20 internos lesionados y 11 fallecidos. En tanto que, en el caso del Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo, Zacatecas, perdieron la vida 4 personas privadas de su libertad. En 2019, en el Centro Regional de Reinserción Social de Cieneguillas, Zacatecas, acontecieron 2 eventos de riña que trajeron como consecuencia la muerte de 16 internos y 6 lesionados. En tanto que, en el centro penitenciario de Fresnillo, se dieron 2 riñas que acarrearon como consecuencia 3 personas internas lesionadas. Además de ello, en el mismo periodo, la autoridad reportó 1 suicidio en cada establecimiento y 1 homicidio más en el caso de Fresnillo.

67. Este Organismo enfatiza la gravedad de la situación que atraviesa el Sistema Penitenciario en esta Entidad Federativa; ya que, pese a que como ya se apuntó renglones arriba, se han emitido diversas Recomendaciones relacionadas con hechos en los que de manera lamentable se han perdido vidas de personas privadas de su libertad, la Secretaría de Seguridad Pública, a través de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social del Estado, no ha tomado medidas para abatir las condiciones que, en dichos casos, han propiciado la pérdida de vidas humanas, o el daño a la integridad de los internos. Contrario a ello, la situación ha empeorado de manera gravísima; tal y como se puede corroborar en el informe de actividades aludido. De éste, se desprende que, en 2020, solo en el Centro Regional de Reinserción Social de Cieneguillas, Zacatecas, se suscitaron 4 riñas, que devinieron en un total de 2 internos muertos y 17 lesionados; además de ello, la autoridad reportó 1 interno lesionado de manera dolosa y otro más en una tentativa de homicidio. A ello, se sumaron dos muertes por suicidio y 12 reos más lesionados, en un evento de fuga registrado en el mismo ejercicio 2020. Finalmente, en el caso del Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo, Zacatecas, se documentaron 2 suicidios y 1 persona privada de su libertad lesionada, a raíz de una riña.

68. En adición a todo lo anterior, para este Organismo resulta alarmante, por decir lo menos, que en la edición 2019 del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, realizado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, dicho Organismo se haya referido de manera concreta a las condiciones de gobernabilidad del establecimiento penitenciario en el cual ocurrió la muerte que se analiza. A raíz de lo cual, enfatizó la insuficiencia de personal de seguridad y custodia, que vigile el adecuado funcionamiento del Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo, Zacatecas. Situación que, efectivamente, se comprobó en el caso motivo de análisis, donde, una vez más, esta Comisión Estatal encontró insuficiente o nula vigilancia en algunas de las zonas que integran el centro, lo cual, es informado inclusive, de manera oficial, por la autoridad penitenciaria. Mientras que, en lo que hace a aspectos que promuevan la reinserción social de los internos, la Comisión Nacional encontró una deficiente separación entre procesados y sentenciados, así como insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación y una inadecuada organización y registros para el cumplimiento del plan actividades de los internos.

69. Por otro lado, en la edición 2020 de dicho Diagnóstico, el Organismo Nacional realizó observaciones relacionadas con los siguientes rubros:

- ✓ **Aspectos que garantizan la integridad de las personas privadas de la libertad Hacinamiento:**
  - ➢ Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los derechos humanos.
- ✓ **Aspectos que garantizan una estancia digna:**
  - ➢ Deficiencias en la alimentación.
  - ➢ Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las personas privadas de la libertad.
  - ➢ Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para la comunicación con el exterior.
  - ➢ Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de la cocina y/o comedores.
- ✓ **Condiciones de gobernabilidad**
  - ➢ Presencia de actividades ilícitas.
- ✓ **Reinserción social de las personas privadas de la libertad**
  - ➢ Deficiente separación entre procesados y sentenciados.
  - ➢ Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad.

- Inadecuada vinculación de la persona privada de la libertad con la sociedad.

70. Con base en tales resultados, este Organismo tiene por cierto que, la Dirección General de Prevención y Reinserción Social del Estado de Zacatecas, incumple de manera repetida su obligación reforzada de garantizar el derecho a la vida e integridad de las personas que se encuentran privadas de su libertad, en los centros penitenciarios a su cargo. Desatención que trae como efecto, la contravención de los diversos instrumentos jurídicos que, como ya se estableció con antelación, amparan dichos derechos en favor de todo gobernado, incluyendo a las y los internos. Desacato que, como en el caso ocurrió, involucra la transgresión de los derechos fundamentales de dichas personas, específicamente, el derecho a la vida y el derecho a la integridad y seguridad de su persona; lo cual, es contrario a la obligación del Estado Mexicano, de velar por la vida e integridad de las y los internos, que debería manifestarse observando en todo momento lo dispuesto por el *corpus juris* invocado a lo largo del presente documento, así como, en lo particular, por el artículo 18, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que, en conjunto con la Ley Nacional de Ejecución Penal, reconoce el derecho de las personas privadas de la libertad a la reinserción social.

D. De la violación del derecho a la vida e integridad personal, en perjuicio de VD†.

71. En el caso que nos ocupa, esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, acreditó que, el Estado, incumplió con su función reforzada, como ente garante de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad, en agravio de **VD†**, pues se tiene debidamente comprobado que su deceso, aconteció en el interior del Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo, Zacatecas, precisamente, bajo la custodia del Estado, según se desprende de las constancias que integran el sumario.

72. Muerte que, de acuerdo con los resultados de la necropsia, practicada a su cadáver por el **DR1**, Médico Legista adscrito al Departamento de Medicina Legal del Instituto Zacatecano de Ciencias Forenses, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, acaeció a causa de traumatismo craneoencefálico; siendo además importante señalar que, al momento de realizar dicha necropsia, fueron documentadas un total de 9 lesiones en diversas áreas de su cuerpo, las cuales también constan en el acta de inspección e identificación de cadáver, elaborada por la **PI1**; medios de prueba que se encuentran integrados en la carpeta de investigación (…), a cargo de la Fiscal del ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios Dolosos 3, del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas.

73. Por tal motivo, este Organismo en su calidad de Órgano de Estado, responsable de la protección y defensa de los derechos humanos en el territorio zacatecano, se encuentra obligada a conocer de los hechos, al advertir que la muerte de **VD†**, se debió a la inseguridad imperante y la falta de personal que ejerza y cumpla eficazmente con funciones de seguridad y custodia del Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo, Zacatecas. Escenarios que, esta Comisión, ha evidenciado con anterioridad dentro de las diversas Recomendaciones emitidas con motivo de hechos en los cuales, al igual que en el que motiva la presente Recomendación, diversos factores confluyeron para que, a la postre, se perdiera una vida humana.

74. En el caso concreto, el Estado incumplió con su obligación de asegurar y garantizar los derechos humanos de las personas que se encuentran privadas de su libertad en el Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo, Zacatecas; circunstancia de reclusión en la cual, como ya se indicó, la autoridad penitenciaria, al encargarse de su custodia, asume la calidad de garante; lo cual, lo obliga a preservar todos aquellos derechos que por disposición judicial han sido restringidos, puesto que quienes se encuentran en centros de reclusión, están sujetos a un régimen jurídico particular y dicho sometimiento o especial sujeción, no justifica el detrimento o menoscabo de sus derechos fundamentales, como en el caso sucedió con la supresión del derecho a la vida, en perjuicio de **VD†.**

75. Así las cosas, este Organismo toma nota, en primer término, de que en cumplimiento a lo ordenado por la regla 71 de las Reglas Mandela[66], disposición que mandata que, con independencia de que se inicie investigación interna, el Director de cualquier centro penitenciario deberá notificar sobre el fallecimiento, desaparición o lesión grave de un interno a una autoridad judicial, u otra que sea competente e independiente de la que administre el centro, siempre y cuando cuente con facultades de investigación, la **DCP1**, entonces Directora del Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo, Zacatecas, notificó el fallecimiento de **VD†**, ocurrido el día 21 de abril de 2020, al **SJ**, Director General de Prevención y Reinserción Social del Estado de Zacatecas, remitiendo copia del oficio mediante el cual lo hizo, a esta Institución.

76. Consecuentemente, de conformidad con lo ordenado por los diversos instrumentos jurídicos que sustentan la presente Recomendación, y, además, con fundamento en el Principio 34, del Conjunto de Principios para la Protección de todas las Personas Sometidas a Cualquier forma de Detención o Prisión[67], se inició la investigación de los hechos. Además, esta Comisión verificó que, en cumplimiento a dichos instrumentos jurídicos, la Representación Social también inició su respectiva indagatoria. Esto, es posible corroborarlo con el acta de aviso de hechos probablemente constitutivos de delito, levantada a las **20:30** horas del día 21 de abril de 2020, signada por la **PI1**; acto de investigación que dio origen a la carpeta de investigación (…), a cargo de la Fiscal del ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios Dolosos 3, del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas.

77. A través de dicho documento, la **DCP1**, entonces Directora del Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo, Zacatecas, señaló que, según información contenida en parte informativo signado por **AR1**, Comandante del Primer Grupo de Guardia, siendo aproximadamente las **19:45** horas del día **21 de abril de 2020**, mientras se encontraba en la caseta A, en compañía de **AR2**, personal de Seguridad y Custodia de dicho establecimiento, se presentó **AR3**, también custodio penitenciario, quien se encontraba realizando pase de lista y ubicación a los internos que habitan el módulo número 1 del área de población, acompañado del también custodio **AR4**, quien en ese instante solicitaba la presencia de un Comandante, debido a que un interno se encontraba desmayado en dicho módulo.

78. Asimismo, en dicho oficio que, vale decir, coincide totalmente con el contenido del parte informativo suscrito por **AR1**, se asentó que antes de que el personal hiciere presencia en el módulo 1, se encontraron con los internos **PPL1, PPL2** y **PPL3**, quienes ya cargaban al agraviado, y ante la presencia de dichas autoridades lo bajaron, y pidieron la presencia del médico del centro, pues al parecer **VD†**, estaba desmayado o había convulsionado. De la misma manera, se indicó que el custodio **AR5** verificó los signos vitales del agraviado, encontrando ausencia de éstos, por lo que de inmediato se activaron protocolos de cadena de custodia y primer respondiente, y se informó el hecho al entonces Subdirector del establecimiento penitenciario **SCP**, así como al **DR2**, quien a las **20:15** horas realizó valoración correspondiente, encontrando que el agraviado ya no contaba con signos vitales.

79. La información asentada en el párrafo anterior, se robustece con el contenido del acta de aviso de hechos, que como ya se dijo anteriormente, originó la carpeta de investigación marcada con el número (…); en la cual la **PI1**, asentó de manera general que, siendo las **20:30** horas del día 21 de abril de 2020, luego de recibirse un reporte, personal de dicha Corporación, adscrito a la Unidad de Homicidios Dolosos y a la Unidad Mixta, acudió al Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo, Zacatecas, en compañía del **DR1**, Perito

---

66 Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, 1. "Sin menoscabo de que se inicie una investigación interna, el director del establecimiento penitenciario comunicará sin dilación todo fallecimiento, desaparición o lesión grave de un recluso a una autoridad judicial u otra autoridad competente que sea independiente de la administración del establecimiento penitenciario y esté facultada para llevar a cabo investigaciones expeditas, imparciales y efectivas de las circunstancias y causas de ese tipo de casos. La administración del establecimiento penitenciario cooperará plenamente con esa autoridad y garantizará la preservación de todas las pruebas. 2. La obligación enunciada en el párrafo 1 de esta regla se aplicará igualmente siempre que existan motivos razonables para considerar que en el establecimiento penitenciario se ha cometido un acto que constituya tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, independientemente de que se haya recibido o no una denuncia formal. 3. Siempre que existan motivos razonables para considerar que se ha cometido alguno de los actos mencionados en el párrafo 2, se tomarán medidas de inmediato para velar por que ninguna persona que pudiera estar involucrada participe en la investigación o mantenga contacto con los testigos, la víctima o la familia de esta".

67 "Si una persona detenida o presa muere o desaparece durante su detención o prisión, un juez u otra autoridad, de oficio o a instancias de un miembro de la familia de esa persona o de alguna persona que tenga conocimiento del caso,

investigará la causa de la muerte o desaparición. Cuando las circunstancias lo justifiquen, se llevará a cabo una investigación iniciada de la misma manera cuando la muerte o desaparición ocurra poco después de terminada la detención o prisión. Las conclusiones de esa investigación o el informe correspondiente serán puestos a disposición de quien lo solicite, a menos que con ello se obstaculice la instrucción de una causa penal en curso".

Médico Legista, así como del Perito en Criminalística de Campo. En dicha acta, la agente explicó que, una vez trazada la ruta de acceso, se encontró en posición decúbito dorsal al agraviado, quien ya había perdido la vida y presentaba diversos golpes en su humanidad. De la misma manera, se refuerza con el acta de registro e inspección del lugar del hecho, en la cual, la **PI1**, estableció que, el personal ya señalado, accedió al Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo, Zacatecas, ingresando hasta el área de dormitorios 1 y 4, encontrando el cuerpo sin vida del interno **VD†**, mismo que estaba postrado en posición decúbito dorsal.

80. Por otro lado, esta Comisión advierte también que, en concordancia con la Regla 69[68], de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, (Reglas Nelson Mandela), los familiares de **VD†** fueron notificados de su deceso, sin mayor dilación. Situación que es posible corroborar con el análisis de las entrevistas que les fueran recabadas por la Representación Social a **VI1** y a **VI2**, padres del agraviado que, en fecha 22 de abril de 2020, realizaron la identificación del cadáver de su hijo, e informaron que entre las 00:30 y 01:00 horas de ese día, recibieron llamada telefónica por parte de la Trabajadora Social del Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo, Zacatecas, quien les informó sobre la muerte de su hijo; información que, en el caso de la señora **VI1** reiteró también en su declaración vertida en fecha 19 de agosto de 2020 ante personal encargado del trámite de la queja que motiva esta Recomendación.

81. Así pues, en lo que atañe al deber que tienen las autoridades penitenciarias de informar a los familiares de los internos, cuando éstos pierden la vida estando bajo su custodia, independientemente de las causas, esta Comisión advierte que no se retardó de manera injustificada o prolongada, informar a **VI1** y a **VI2** sobre la muerte del señor **VD†**, en su calidad de padres de éste.

82. Ahora bien, para esta Institución es importante analizar las condiciones en que se encontraba recluido el agraviado, a fin de establecer si éstas fueron un factor que convergiera en la pérdida de su vida, debido a la existencia de una posible sobrepoblación y/o hacinamiento. Para ello, es viable referirse a la Guía Complementaria "Agua, saneamiento, higiene y hábitat en las cárceles",[69] elaborada en 2013 por el Comité Internacional de la Cruz Roja, en coordinación con la Organización de las Naciones Unidas, documento en el cual se estableció que, aun cuando existen recomendaciones de diversos Organismos Internacionales, en lo referente a las condiciones de habitabilidad de los espacios destinados para los internos, como pueden ser las de ventilación, iluminación e higiene. No existe una norma universal respecto a las dimensiones de espacio, por lo cual se señalaron las medidas que aproximadamente se manejan en diversos países, incluyendo a México, en donde la medida sugerida para celdas individuales es de **4m^2**, mientras que **15m^2**, es la medida propuesta para celdas triples.[70]

83. Relativo a ello, importa puntualizar que, el Comité Internacional de la Cruz Roja, establece recomendaciones generales, con el propósito de definir un criterio sensato de habitabilidad, por lo cual, sugiere lo siguiente:

Alojamiento en celda individual:	**Alojamiento en celda múltiple**
—Un detenido. — Dimensión de la celda de 5.4 m2 —Incluye una cama, pero no los servicios sanitarios.	— Diez detenidos. — Dimensión del dormitorio de 3.4 m2 por recluso (superficie total: 34 m2). — Incluye el espacio para las literas y servicios sanitarios.

84. Por otro lado, en el documento "La sobrepoblación en los centros penitenciarios de la República Mexicana", edición 2016, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, propone que, para evaluar la sobrepoblación penitenciaria en nuestro país, debe utilizarse el

68 Ídem, Regla 69. "En caso de fallecimiento de un recluso, el director del establecimiento penitenciario informará inmediatamente a sus familiares más allegados o a la persona designada como contacto para casos de emergencia. Ante un supuesto de enfermedad o lesión grave o de traslado de un recluso a un centro hospitalario, el director deberá notificar a las personas que el recluso haya designado para recibir información relacionada con su estado de salud. Se respetará la solicitud expresa Primera parte, del recluso de que no se informe a su cónyuge o familiar más cercano en caso de enfermedad o lesión".

69 La Guía Complementaria "Agua, saneamiento, higiene y hábitat en las cárceles", puede consultarse en: https://www.icrc.org/es/doc/assets/files/publications/icrc-002-4083.pdf

70 Centros de Prevención y Readaptación Social, Normas de Diseño, Secretaría de Gobernación. México, 1982.

criterio aritmético universal de medición, que establece la división de la población total sobre la capacidad instalada, menos uno, por cien, a fin de identificar el porcentaje de sobrepoblación en una hipótesis de ocupación del 100%.

85. En lo atinente, este Organismo documentó, según información proporcionada en fecha 03 de agosto de 2021 por el **DCP2**, en ese entonces Director del Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo, Zacatecas, que cada una de las estancias de los dormitorios del área de población de dicho establecimiento penitenciario, se encuentra diseñada para ser habitada por 4 internos, por lo que si tomamos en consideración que, según el parte de novedades de fecha 21 de abril de 2020, por el **AR1**, Comandante de la Primera Guardia, el agraviado habitaba la estancia número 3 del módulo 1, junto con los internos **PPL4, PPL5** y **PPL6.**

86. Así pues, en lo atinente al factor de sobrepoblación, en el área que en vida era habitada por el señor **VD†**, se obtienen los siguientes resultados:

Datos	**Aplicación de la fórmula**
Capacidad instalada en la estancia 3 del dormitorio 1, del Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo, Zacatecas: 4 Población total: **4**	*Sobrepoblación* =4/4= **1** Sobrepoblación = 1-1= **0** *Sobrepoblación* = 0 *100= **00**
Resultado	*Sobrepoblación* = **0 %**

87. Se advierte entonces, que, por lo que hace al área específica que en vida era habitada por el agraviado, no prevalecían condiciones de sobrepoblación y hacinamiento y, por ende, no son factores que hayan incidido en la pérdida de su vida. No obstante, esta Comisión estima relevante ahora, analizar la correspondencia entre el número total de internos que, en fecha 21 de abril de 2020 se encontraban privados de su libertad en el Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo, Zacatecas, en relación con el personal disponible para detentar la seguridad y custodia del centro. Así, se tiene que, según se estableció en información remitida por la **DCP1**, entonces Directora del Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo, Zacatecas, el número total de internos, ese día, ascendía a **322**, mientras que el total de personal era de **25**, a razón de 3 Comandantes, 16 elementos de Seguridad y Custodia y 6 elementos de la Policía estatal Preventiva de Zacatecas.

88. Para el análisis de este tópico, resulta conveniente referirse al Manual de Cárceles. Guía para la planeación y el diseño arquitectónico[71] retomado por la Comisión Nacional de los derechos Humanos, en el documento denominado “La sobrepoblación en los centros penitenciarios de la República Mexicana”, edición 2016, (en el cual, sin soslayar el hecho de que, con independencia de la atención que debe darse a las diferentes zonas de la prisión, así como a los turnos de personal, aspectos que también deben atenderse con la misma importancia), se propuso lo siguiente:

Nivel de seguridad de la prisión	**Número de internos por custodio.**
Alta	1
Media	10
Baja	20

89. Entonces pues, si el número total de internos el día 21 de abril de 2020, era de **322** personas privadas de su libertad, mientras que el personal penitenciario, se distribuyó de la manera siguiente:

1. En el turno comprendido entre las 08:30 y las 19:30 horas: de 3 Comandantes, 18 elementos de Seguridad y Custodia y 6 elementos de la Policía estatal Preventiva de Zacatecas.
2. En el turno de las 19:30 del 21 de abril de 2020, a las 01:30 horas del 22 de abril de 2020: de 3 Comandantes, 16 elementos de Seguridad y Custodia y 6 elementos de la Policía estatal Preventiva de Zacatecas.

71 ROJAS A., Roberto et al. *Cárceles. Guía para la planeación y diseño arquitectónico*. Precoor. México. 2012. pág. 260.

3. En el turno de las 01:30 a las 06:30 horas del día 22 de abril de 2020: de 3 Comandantes, 16 elementos de Seguridad y Custodia y 6 elementos de la Policía estatal Preventiva de Zacatecas.
4. En el turno de las 06:30 a las 08:45 horas del día 22 de abril de 2020: de 3 Comandantes, 16 elementos de Seguridad y Custodia y 6 elementos de la Policía estatal Preventiva de Zacatecas.

90. En ese contexto, durante el primer turno, el promedio de internos que le correspondía vigilar al personal disponible era de **11.92** hombres; en el segundo, tercero y cuarto turno, era de **12.11**; porcentajes que, *prima facie,* no contravienen las disposiciones relativas al número de internos que deben ser vigilados por cada elemento de seguridad y custodia, atendiendo a la clasificación de la seguridad del centro de que se trate. Puesto que, con relación al tema del número de internos que corresponde vigilar a cada elemento de seguridad y custodia, resulta crucial hacer énfasis en que la Organización de las Naciones Unidas, se ha pronunciado en reiteradas ocasiones, en cuanto a la importancia que debe establecerse entre el número de personal de seguridad y el total de internos.

91. Sin embargo, es importante subrayar que algunas personas privadas de su libertad son de alta peligrosidad, por lo que, en consecuencia, podrán aplicarse medidas especiales de seguridad, tal y como lo prevé el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo cual, implicaría entonces que, por ejemplo, se deba aumentar el número de custodios o policías penitenciarios que deban vigilar a cierto número de internos, o ciertas áreas, de acuerdo con la tabla anterior. En el caso que nos ocupa, debe retomarse el hecho de que, del personal disponible, según la información contenida en el rol de servicios de fechas 21 de abril de 2020, solamente **AR5,** Custodio número 74, estaba asignado a la vigilancia del área de dormitorios, lo cual evidentemente contraviene la obligación reforzada de cuidado, que el Estado debe asumir, en cuanto a los derechos humanos de las personas privadas de su libertad, en los centros de detención sujetos a su jurisdicción; hecho que, innegablemente, impactó en la falta de control y seguridad efectiva de esa zona, trayendo como consecuencia, la pérdida de la vida de **VD†**.

92. Por otro lado, de la comparecencia que personal de este Organismo recabara al referido **AR5**, éste señaló no tener conocimiento de cuánta población existía en el área donde perdió la vida el agraviado, debido a que él es el cocinero y, por ende, no realiza servicio en ningún área que no sea la cocina; por lo que solamente tuvo conocimiento de los hechos, por haber acompañado a **AR1**, Comandante del Primer Grupo de Guardia, luego de que **AR3**, le diera aviso de lo acontecido. Mientras tanto, tanto **AR1** como **AR2** y **AR3**, estos últimos, personal de Seguridad y Custodia, coincidieron en manifestar a este Organismo que, debido a la falta de personal suficiente, generalmente no se asigna a ninguna persona a la vigilancia de los módulos de población, por lo que, entonces, es posible afirmar que, pese a que en la documentación oficial, se estableció que el custodio **AR5** vigilaba los dormitorios, la realidad es que ninguna persona cumplía dicha función.

93. Dicha situación, es cada vez más preocupante para este Organismo, pues no es la primera vez que se acredita la insuficiencia de personal en las diversas áreas en que se divide el Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo, Zacatecas. En las Recomendaciones recaídas dentro de los expedientes de queja **CDHEZ/325/2018**, **CDHEZ/454/2018**, **CDHEZ/509/2018** y **CDHEZ/109/2020**, por hechos en que también se perdieran vidas humanas de personas privadas de su libertad en dicho establecimiento, se hizo hincapié en dicho factor. En el primer caso, se acreditó que, debido a la falta de personal penitenciario, la persona encargada de la vigilancia del circuito cerrado atendía otras labores, al momento de los hechos en que perdiera la vida, la víctima directa identificada, lo que impidió que pudiera percatarse de lo sucedido con el monitoreo; en el segundo, se demostró que, en el área del gimnasio, zona donde perdió la vida la víctima identificada, ningún elemento de seguridad y custodia se encontraba a cargo de la vigilancia del área y, en los hechos del último expediente, se acreditó la falta de personal, también en el área de separos.

94. En ese orden de ideas, se concluye que, la falta de personal de seguridad y custodia en el Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo, Zacatecas, es una de las deficiencias

que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas, por conducto de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social del Estado de Zacatecas, ha omitido atender a lo largo de los últimos años, a pesar de las Recomendaciones precitadas y de las observaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a través del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria. De lo contrario, a la fecha se hubieren implementado acciones eficientes para corregir tales deficiencias, a partir de la muerte de las víctimas identificadas con motivo de la integración de los citados expedientes.

95. De modo tal que, para la fecha en que sucedieron los hechos que motivan esta Recomendación, la autoridad penitenciaria ya habría mejorado las condiciones de seguridad y aumentado el personal encargado de vigilar todos los espacios en que se ha dividido el centro, especialmente de las áreas donde se han suscitado los decesos que originaron dichos expedientes; pues además a la falta de personal, se suma la insuficiencia de cámaras de vigilancia o, en su defecto, de un ineficiente o inexistente monitoreo de dichas cámaras, como más adelante se analiza en el caso concreto que nos ocupa.

96. Con lo anterior, se demuestra una vez más que, la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas, incumple de manera reiterada con su posición de garante de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad; en el presente caso, específicamente de la población penitenciaria del Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo, Zacatecas, al no aumentar el número de personal operativo que se requiere para la supervisión y vigilancia de las diferentes áreas en las que se divide dicho establecimiento. Lo cual, representa un riesgo para dicha población, repercutiendo, como en el caso nos ocupa, en la violación al derecho a la integridad y a la vida de **VD†**; pero, además, impacta de manera directa en las condiciones de seguridad en que los familiares de los internos conviven con éstos, y en las que el personal que ahí labora, desempeña sus funciones.

97. Retomando el tema de la falta de cámaras de vigilancia en todas las zonas del Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo, Zacatecas, en el presente caso se tiene que, a pesar que en el área donde sucedieron los hechos sí se encuentra ubicada una cámara, la misma es insuficiente y no alcanza a cubrir todo el Módulo; lo cual se puede corroborar además, con el contenido de las actas de inspección de videos realizada por personal de la Fiscalía y por este Organismo, con la versión de **AR4**, quien en comparecencia de fecha 21 de agosto de 2020, especificó que existe un punto ciego y por lo tanto, la grabación no cubre toda el área.

98. La situación anterior, denota también la responsabilidad institucional del centro, puesto que a pesar de que en las muertes de internos que motivaron las Recomendaciones anteriormente referidas, dicho factor fue determinante para que no existiera una adecuada vigilancia, los directivos no han realizado gestiones para subsanar dicha carencia. Así como también de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social del Estado de Zacatecas, ya que, pese a que este Organismo ha hecho énfasis en esa carencia, es un aspecto que, hasta la fecha, no se ha atendido y hace que cobren sentido las observaciones que, hasta este punto, se han realizado, habida cuenta de que dicha problemática, también se detectó por este Organismo en los asuntos señalados con anterioridad.

99. En lo que respecta al expediente **CDHEZ/325/2018**, del que deriva la Recomendación **02/20**, la falta de personal suficiente impactó en el debido monitoreo de dicho sistema, pues, la persona encargada de ello, al momento de los acontecimientos, se encontraba realizando otras labores, precisamente, debido a la falta de elementos de seguridad y custodia, que cubran la vigilancia de todo el centro. Por lo que hace a la Recomendación **03/2020**, recaída dentro del expediente **CDHEZ/454/2018**, se acreditó que, en el área de gimnasio, ni siquiera se cuenta con cámaras de vigilancia. Finalmente, en lo que concierne al expediente **CDHEZ/509/2018**, del que deriva la Recomendación **04/2020**, pese a haber cámaras ubicadas en el área de separos, como se comprobó en el asunto relacionado con el expediente **CDHEZ/325/2018**, las grabaciones del lugar no fueron proporcionadas en su totalidad, ni a este Organismo, ni a la Representación Social.

100. Circunstancia que, además, representa un indebido entorpecimiento a las investigaciones iniciadas para el esclarecimiento de los hechos, y conlleva el incumplimiento

por parte de las autoridades, de las garantías de protección, respeto y garantía de los derechos humanos de los internos, sumado también al incumplimiento de las obligaciones de prevención, investigación y sanción de los posibles responsables de violentar dichos derechos.

101. Por otro lado, esta Comisión Estatal no pasa desapercibido que, al igual que en el caso que motivó la Recomendación del expediente **CDHEZ/109/2020**, de la lista de personal disponible en fecha 21 de abril de 2020, ningún elemento de Seguridad y Custodia, o de la Policía Estatal Preventiva de Zacatecas, se encontraba asignado al monitoreo del circuito cerrado, incluso dicho servicio ya no aparece en el rol proporcionado por la **DCP1**, contrario por ejemplo a lo documentado dentro del expediente **CDHEZ/325/2018**, del que derivó la Recomendación **02/20**, en el cual se acreditó que la falta de personal suficiente impactó en el debido monitoreo de dicho sistema, pues, la persona encargada de ello, al momento de los acontecimientos, se encontraba realizando otras labores, precisamente, debido a la falta de elementos de seguridad y custodia, que cubran la vigilancia de todo el centro.

102. Por lo tanto, con dichos antecedentes, la autoridad penitenciara debió, además de incrementar el personal del centro penitenciario, asegurarse de que siempre, una persona debidamente capacitada para ello, se encuentre monitoreando las cámaras de vigilancia; sin embargo, este Organismo logró acreditar que, en lugar de ello, no aparece dicho servicio, impactando de manera directa en la nula vigilancia del circuito y, como en el caso ocurrió, fue un factor que convergió en la muerte del agraviado.

103. Dichas precisiones, guardan estrecha relación con el hecho de que, en los asuntos citados y en el que ahora se resuelve, el Estado no ha logrado probar que cumplió con su posición de garante de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad. Puesto que, acorde al criterio sustentado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos:

> *"corresponde a la parte demandante, en principio, la carga de la prueba de los hechos en que se funda su alegato; no obstante, se ha destacado que a diferencia del derecho penal interno en los procesos sobre violaciones de derechos humanos, la defensa del Estado no puede descansar sobre la imposibilidad del demandante de allegar pruebas, cuando es el Estado quien tiene el control de los medios para aclarar hechos ocurridos dentro de su territorio"*[72].

104. Por consiguiente, es posible afirmar que, cuando se investigan violaciones a derechos humanos, el Estado tiene la obligación de desvirtuar los hechos atribuidos a sus agentes, pues es éste el que tiene el control de todos los medios de convicción para aclarar los hechos ocurridos, sobre todo cuando, como ya se ha señalado, la víctima del quebranto a sus derechos humanos, se encuentra en estado de vulnerabilidad, como sucedió en el caso específico de **VD†,** que al estar privado de su libertad, se encontraba bajo su total subordinación, de forma que el Estado, debió asumir una responsabilidad especial, reforzada, de respecto a la garantía de sus derechos, al depender su integridad personal y su vida, completamente de éste.

105. En consecuencia, esta Comisión reitera que, la carencia de cámaras de vigilancia, ubicadas en cada una de las áreas del Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo, Zacatecas, imposibilita que se tenga debidamente documentado cómo sucedió la muerte de **VD†** y, por ende, dificulta la investigación del Ministerio Público, al no contar con datos de prueba suficientes, tendentes a inferir qué personas participaron en los hechos en donde éste perdió la vida, lo cual se atribuye de manera directa al Estado, pues el hecho en sí representa una violación a sus derechos humanos, de acuerdo con los estándares ya establecidos en el presente documento recomendatorio.

106. En el contexto anterior, este Organismo nota que la Dirección General de Prevención y Reinserción Social del Estado de Zacatecas, ha omitido atender las deficiencias que han sido reiteradamente evidenciadas en las Recomendaciones citadas a lo largo de la que ahora se emite y que se repitieron en el caso de la muerte de **VD†,** y los detalles aquí evidenciados,

---

72 Corte IDH. Caso Escher y otros Vs. Brasil, sentencia de excepciones Preliminares, fondo, reparaciones y costas del 6 de julio de 2009. Párr. 127."·

dan cuenta de ello. Siendo incompatibles con el Principio XX del Conjunto de Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad de las Américas, que al efecto y entre otras cuestiones disponen que, el personal que tenga bajo su responsabilidad la dirección, custodia, tratamiento, traslado, disciplina y vigilancia de personas privadas de libertad, deberá ajustarse, en todo momento y circunstancia, al **respeto a los derechos humanos de las personas privadas de libertad** y de sus familiares.

107. A efectos de lo anterior, dicho personal **debe seleccionarse cuidadosamente**, teniendo en cuenta su integridad ética y moral, sensibilidad a la diversidad cultural y a las cuestiones de género, **capacidad profesional, adecuación personal a la función, y sentido de responsabilidad.** Lo cual implica que, en los lugares de privación de libertad, el Estado debe apostar por la elección **de personal calificado y suficiente** para garantizar la seguridad, vigilancia, custodia, y para atender las necesidades médicas, psicológicas, educativas, laborales y de otra índole.

108. Así las cosas, retomando el Diagnóstico de Supervisión Penitenciaria 2019 y 2020, elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, este Organismo Local concluye que, persiste la problemática de falta de personal de seguridad y custodia, al interior del Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo, Zacatecas, detectado por el Organismo Nacional en dicho informe. Circunstancia que, infortunadamente, repercute en una deficiente vigilancia de todas las áreas que integran la infraestructura del establecimiento y, por ende, impacta en el control eficaz que debe prevalecer, con respecto a las condiciones de seguridad, no solo de los internos, sino del propio personal adscrito al centro, y desde luego, de las personas que visitan a los internos, tal y como lo ha comprobado esta Institución, en las Recomendaciones emitidas en los últimos años, que tuvieron como origen, la muerte de una o más personas privadas de su libertad en hechos violentos suscitados al interior de los centros penitenciarios de esta Entidad Federativa.

109. En caso concreto, es posible establecer que, en fecha 21 de abril de 2020, ningún elemento de Seguridad y Custodia, ni de la Policía Estatal Preventiva que brindan apoyo al Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo, Zacatecas, se encontraba asignado a los Módulos del Área de Población, así como tampoco al monitoreo del circuito cerrado de dicho establecimiento penitenciario. Lo que implica una deficiente vigilancia tanto remota, como por contacto directo, falta de vigilancia que contribuyó a que **VD†,** perdiera la vida en circunstancias que no fue posible establecer con claridad y que hasta ahora se desconocen, mientras se encontraba bajo la custodia del Estado. Por lo tanto, este Organismo concluye que, de haber existido una vigilancia efectiva, ya sea a través de cámaras de seguridad o con la intervención directa del personal operativo, seguramente habría sido posible tomar medidas efectivas e inmediatas, para salvaguardar su vida e integridad del ahora occiso.

110. Esta falta de personal, se torna por demás grave, pues los posibles victimarios de **VD†**, tuvieron toda libertad y tiempo para agredirlo, tal y como puede constatarse con el análisis del certificado de la necropsia que le fuera practicada, en la cual además de la causa de muerte, se asentó que éste sufrió múltiples heridas en su humanidad, resultando muerto por un traumatismo craneoencefálico. Situación que, es prevenible, pero que, en el caso concreto, no se evitó, debido a que la presencia del personal de Seguridad y Custodia del Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo, Zacatecas, se limitó a los dos pases de lista, realizados en fecha 21 de abril de 2020; lo que de ningún modo puede traducirse en una verdadera vigilancia y seguridad de los internos.

111. Aunado a ello, esta Comisión nota la deficiente capacitación del personal operativo del Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo, Zacatecas, pues a pesar de que en la información oficial se afirma que se implementan los debidos protocolos de cadena de custodia y primer respondiente, del análisis de las entrevistas proporcionadas por los elementos de Seguridad y Custodia, a elementos de la Policía de Investigación se advierte lo contrario. Es decir, si **AR4** encontró a **VD†** tirado en el piso, desde ese momento se convirtió en el primer respondiente y debió preservar la escena, sin soslayar desde luego el que tenía la obligación de solicitar apoyo médico y, en su caso, él prestar primeros auxilios; lo que en el caso no sucedió, de acuerdo a sus propias manifestaciones.

112. Sin embargo, en la entrevista que proporcionó al **PI2**, Policía Primero de Investigación, de la Fiscalía General de Justicia del Estado, el custodio sostuvo que luego de encontrar el cuerpo del agraviado, permitió que algunos internos lo manipularan, al cargarlo para llevarlo al área médica; información que coincide con la que fue proporcionada de manera oficial por la **DCP1**, así como con la entrevista que realizó la autoridad ministerial a los propios internos, quienes aseveraron que cargaron el cuerpo del **VD†**, lo que evidentemente se contrapone a las disposiciones de los Protocolos de Actuación Policial que prevén que "…todos los servidores públicos que intervienen en el procesamiento del lugar de los hechos o del hallazgo, así como en la cadena de custodia **deben proteger y preservar los datos y elementos de prueba (medios, indicios o evidencia)** para garantizar su autenticidad en el juicio y la veracidad de lo que se hace constar y, por ende, el debido proceso. En ese sentido, la intervención en el lugar de los hechos o del hallazgo, en el procesamiento de los datos o elementos de prueba, y en la aplicación de cadena de custodia, entre otros, precisa una preparación sólida e idónea, una capacitación constante, con el conocimiento de las formalidades técnicas y métodos que exige la normatividad aplicable para la actividad que realizan". Ello permite proteger y reunir de forma eficaz las pruebas en el lugar de los hechos y reduce el mínimo la contaminación o pérdida de material pertinente.

113. Por su parte, el Código Nacional de Procedimientos Penales, en los artículos 131, 132, 227, dispone que el Ministerio Público tiene la obligación de iniciar la investigación y, ordenar la recolección de indicios y medios de prueba que deberán servir para sus respectivas resoluciones y las del Órgano Jurisdiccional, así como recabar los elementos necesarios que determinen el daño causado por el delito y la cuantificación del mismo para los efectos de la reparación. De manera específica, los Policías deben:

- Preservar el lugar de los hechos o del hallazgo y en general, realizar todos los actos necesarios para garantizar la integridad de los indicios. Y, en caso de ser necesario, dar aviso a los Policías con capacidad para procesar la escena del hecho y al Ministerio Público;
- Recolectar y resguardar objetos relacionados con la investigación de los delitos;
- Entrevistar a las personas que pudieren aportar algún dato o elemento para la investigación; así como proporcionar atención a víctimas u ofendidos o testigos del delito. Para garantizar lo anterior, se ha implementado la cadena de custodia, que es el sistema de control y registro que se aplica al indicio, evidencia, objeto, instrumento o producto del hecho delictivo, desde su localización, descubrimiento o aportación, en el lugar de los hechos o del hallazgo, hasta que la autoridad competente ordene su conclusión, con el fin de corroborar los elementos materiales probatorios y la evidencia física, la cadena de custodia se aplicará teniendo en cuenta los siguientes factores: identidad, estado original, condiciones de recolección, preservación, empaque y traslado, lugares y fechas de permanencia y los cambios que en cada custodia se hayan realizado; igualmente se registrará el nombre y la identificación de todas las personas que hayan estado en contacto con esos elementos.

114. En ese sentido, la tesis de rubro "**CADENA DE CUSTODIA. DEBE RESPETARSE PARA QUE LOS INDICIOS RECABADOS EN LA ESCENA DEL CRIMEN, GENEREN CONVICCIÓN EN EL JUZGADOR"**, señala que la recolección de indicios, en una escena del crimen se realiza con la intención de que éstos generen el mayor grado de convicción en el juzgador, para lo cual, es necesario respetar la llamada "cadena de custodia", que consiste en el registro de los movimientos de la evidencia, es decir, es el historial de "vida" de un elemento de evidencia, desde que se descubre hasta que ya no se necesita. Por ello, la cadena de custodia es el conjunto de medidas que deben tomarse para preservar integralmente las evidencias encontradas en una escena del crimen, convirtiéndose en requisitos esenciales para su posterior validez. Su finalidad es garantizar que todos los indicios recabados sean efectivamente los que se reciben posteriormente en los laboratorios para su análisis, debiendo conocer para tal efecto, el itinerario de cómo llegaron hasta tal fase, así como el nombre de las personas que se encargaron de su manejo, pues, de lo contrario, no podrían tener algún alcance probatorio, pues carecerían del elemento fundamental en este tipo de investigaciones consistente en la fiabilidad.

115. Respecto de los responsables de cadena de custodia, el artículo 228 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece que la aplicación de la cadena de custodia es responsabilidad de quienes, en cumplimiento de las funciones propias de su encargo o actividad, tengan contacto con los indicios, vestigios, evidencias, objetos, instrumentos o productos del hecho delictivo. Por su parte, el "Acuerdo número A/002/2010 mediante el cual se establecen los lineamientos que deberán observar todos los servidores públicos para la debida preservación y procesamiento de los hechos o del hallazgo y de los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como de los instrumentos, objetos o productos del delito", de la entonces Procuraduría General de la República, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 03 de febrero de 2010, señala:

- En su artículo TERCERO que las acciones que se realicen para la Preservación del lugar de los indicios o Evidencias, hasta que finalice la Cadena de Custodia, por orden del Ministerio o del Juez, se asentarán en RCC.
- En el punto CUARTO, se señala que para evitar el rompimiento de CADENA DE CUSTODIA, los servidores públicos que intervengan en las distintas fases del procesamiento de los INDICIOS O EVIDENCIAS desde su búsqueda, traslado a los servicios periciales para la realización de las pruebas correspondientes, así como para su almacenamiento, o transferencia al SAE, según el caso, o que por cualquier circunstancia entren en contacto con los INDICIOS O EVIDENCIAS, deberán asentar en el RCC la información correspondiente a su intervención, así como su nombre completo y otros datos que se requieran, su firma autógrafa, así como la razón de la entrega de unos a otros.

116. De lo anterior, resulta imperativo que tanto la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, como la Fiscalía General de Justicia del Estado, investiguen a fondo los hechos, de manera imparcial y objetiva, con la finalidad de esclarecer los hechos en que **VD†,** perdió la vida, tomando en consideración precisamente las deficiencias en el manejo de la escena de los hechos. Además de ello, este Organismo reitera la importancia de contratación de personal penitenciario suficiente en número y debidamente capacitado, para detentar la seguridad del Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo, Zacatecas, pues, en la medida en que eso suceda, se evitarán eventos como el que ahora nos ocupa, incluyendo las muertes violentas que han sido documentadas en otras Recomendaciones, ya citadas con anterioridad, dentro de esta Recomendación. Asimismo, es de imperiosa necesidad la capacitación a todo el personal en temas de primeros auxilios y de Protocolos de Actuación Policial, mismos que, como ya se evidenció, no fueron observados por el personal del centro penitenciario.

117. De ahí la importancia de que se insista en la contratación de personal suficiente, que cumpla debidamente con las labores de vigilancia de todas las personas privadas de su libertad, como medida de mitigación de la carente infraestructura del Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo, Zacatecas. Pues, además, debe tomarse en consideración que, si bien con el creciente aumento de la tecnología, la cámara de observación se ha convertido en una alternativa popular para la observación directa por parte del personal penitenciario, los puntos ciegos de la cámara, aunados a la falta de supervisión efectiva de los monitores, por razones que, incluso ya han sido evidenciadas en esta Recomendación, trágicamente, se ha manifestado en la muerte de personas privadas de su libertad.

118. Con base en los argumentos hasta aquí esgrimidos, este Organismo considera de elemental importancia que, por parte de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social del Estado de Zacatecas, se prevea la gestión de mecanismos de seguridad física y procedimental como aspectos fundamentales de cualquier establecimiento penitenciario. Asimismo, debe considerarse que la seguridad también depende de un grupo del personal que esté alerta y que interactúe y conozca a sus reclusos, que desarrolle relaciones positivas con éstos y que sea consciente de lo que ocurre en el establecimiento penitenciario. Donde haya un trato justo y un sentido de "bienestar" entre los reclusos y el personal se asegure de que los reclusos se mantengan ocupados en actividades constructivas y productivas que

contribuyan a su futura reinserción social. Este concepto se describe frecuentemente como seguridad dinámica y es cada vez más adoptado de manera global.[73]

119. *"El concepto de la seguridad dinámica implica que el personal penitenciario subalterno debe que estar capacitado y motivado para desarrollar buenas relaciones personales con los reclusos, para entenderlos y comprenderlos como individuos, para ofrecerles ayuda en sus problemas personales con empatía y para involucrarse con ellos mediante un diálogo con un sentido particular"*.[74]

120. Lo anterior, debido a que los internos tienen mayor contacto y con mayor frecuencia con el personal subalterno, debido a la naturaleza propia de las interacciones diarias, por lo que, si dichas interacciones son positivas, tenderán a reducir actitudes y conductas destructivas de los internos y favorecerán el trabajo constructivo, con miras a una verdadera reinserción social. Aunado a ello, la seguridad dinámica permite que el personal se dé cuenta con mayor facilidad de las conductas alarmantes por parte de un recluso, como tentativas de fuga, episodios de violencia entre reclusos o contra el personal, el contrabando de artículos prohibidos, etcétera. Puesto que, *"la seguridad dinámica (…) ofrece la posibilidad de proporcionar información de advertencia antes de que se produzcan ciertos incidentes no deseados y permite que el personal penitenciario tome medidas preventivas para desalentar que se produzcan potenciales incidentes peligrosos".* [75]

121. Este enfoque hacia la seguridad pública (prevención de fugas) y la seguridad en el establecimiento penitenciario (orden interno) reconoce que ambos son posibles solamente a través de la relación entre el personal y los reclusos. La seguridad dinámica implica el conocimiento de lo que ocurre en el establecimiento penitenciario, además de ofrecer un contexto de seguridad y protección con relación a todas las actividades que se llevan a cabo en el establecimiento penitenciario. El concepto de seguridad dinámica cuenta con el beneficio de abordar a los reclusos de forma individual, obteniendo perspectivas materiales e intuitivas de la gestión del establecimiento. El concepto de seguridad dinámica se basa en los siguientes elementos:

- Relaciones positivas, comunicación e interacción entre el personal y los reclusos.
- Profesionalismo.
- Recolección de información relevante.
- Observación y mejora del clima social en la institución penal.
- Firmeza y ecuanimidad.
- Comprensión de la situación personal del recluso.
- Comunicación, relaciones positivas e intercambio de información entre todos los empleados.[76]

122. Luego entonces, partiendo de la premisa de que los sistemas penitenciarios deberían garantizar la implementación de relaciones efectivas entre el personal y los reclusos, a través de la selección de personal y la capacitación, se deduce que, la seguridad dinámica, resulta ser más efectiva cuando existe un grupo profesional, correctamente capacitado. Motivo por el cual, el personal debe ser seleccionado y capacitado especialmente para trabajar con reclusos, dada la importancia de construir y mantener relaciones con éstos, la apropiada capacitación, debería estar reflejada y fomentada a través de la forma en que el personal penitenciario es evaluado, capacitado y seleccionado. Por todo ello, debe implementarse, de manera paulatina, el desarrollo de políticas y procedimientos apropiados que impacten de forma positiva en una contratación efectiva de personal, selección y capacitación por parte de la gestión del sistema penitenciario.[77]

123. Bajo ese entendido, este Organismo Local confirma una vez más, la insuficiencia de personal penitenciario y con ello, del control efectivo de las diversas áreas en que se ha dividido el Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo, Zacatecas. En el caso concreto, se acreditan dichas deficiencias, en los separos y una vez más, en el monitoreo de

---

73 Ídem.
74 Ídem.
75 Ídem.
76 Ídem.
77 Ídem.

las cámaras de vigilancia, ubicadas en el centro; así como en la insuficiencia de éstas en las diversas zonas en que se ha dividido el establecimiento penitenciario. Lo cual, pone en evidencia de nueva cuenta, las nulas acciones implementadas por la Dirección General de Prevención y Reinserción Social del Estado de Zacatecas, para prevenir actos que, por acción o por omisión, culminen con la pérdida de vidas humanas al interior de los centros penitenciarios a su cargo; pese a que este Organismo Autónomo, ha emitido en los últimos años Recomendaciones derivadas de actos como el que ahora nos ocupa.

124. La falta de control efectivo del Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo, Zacatecas, indica que la seguridad a su interior es inconsistente y que se incumple repetidamente la obligación del Estado garante de salvaguardar la vida, seguridad e integridad de los reclusos, de visitantes, e incluso del personal que ahí labora. Dicha omisión, infringe la Regla número 1, de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas, para el Tratamiento de los Reclusos, (Reglas Mandela), que aprobó el Consejo Económico y Social Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal, en el 24 periodo de sesiones, (Viena 18 a 22 de mayo de 2015), y que indica como imperativo improrrogable que, en los centros penitenciarios, se vele en todo momento, por la seguridad de los reclusos, del personal que ahí labore, de todos los proveedores de servicios y de los visitantes que acudan.

125. Luego entonces, con base en los razonamientos vertidos en los párrafos precedentes, este Organismo Estatal logró acreditar, una vez más, que el personal del Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo, Zacatecas, omitió garantizar el derecho a la integridad y a la vida de **VD†,** incumpliendo así con su deber de Estado como garante de los derechos fundamentales de las personas privadas de su libertad, primordialmente del derecho a la vida e integridad. Omisión que es ocasionada por la falta de contratación de personal suficiente, que cubra todas las áreas del centro, ocasionando con ello una deficiencia en las labores de vigilancia y seguridad; lo que conlleva la vulnerabilidad de los internos, al no contar con las debidas garantías para la protección de sus derechos humanos, principalmente su derecho a la vida y a la integridad.

126. Consecuentemente, este Organismo Constitucional Autónomo, resuelve que, las evidencias que se han concatenado a lo largo del presente documento, son suficientes para afirmar que al interior del Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo, Zacatecas, no se cuenta con el personal suficiente que pueda detentar el control de éste, a pesar de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a través de los Diagnósticos de Supervisión Penitenciaria cuyos resultados ya se abordaron en párrafos antecedentes, ha visibilizado dicha problemática año con año. Así como, a pesar de que esta Institución ha emitido Recomendaciones al respecto, no se han implementado las acciones necesarias para garantizar seguridad a los internos, de los visitantes y del propio personal que ahí labora; o bien, éstas han sido insuficientes, pues persisten los actos violentos como el que da origen a la presente Recomendación, y con ello la omisión de su obligación de Estado, como garante de los derechos humanos.

127. Omisión que, en el caso concreto, se actualizó en agravio de **VD†,** pues el hecho de que perdiera la vida, mientras se encontraba bajo la custodia del Estado, contraviene el deber de custodia. Deber que, según el **DR. SERGIO GARCÍA RAMÍREZ:** "*puede comprender diversas conductas, tanto activas como omisivas, que conducen a vulnerar bienes jurídicos y derechos contenidos en la Convención Americana de Derechos Humanos*"[78].

128. Por último, esta Comisión se pronuncia en cuanto a la obligación interna que debe sobrevenir, cuando el Estado se encuentra ante hechos en que pierde la vida una persona, máxime si dicha muerte, aconteció, como en la especie, bajo su control y custodia; por lo tanto, es deber indubitable de las autoridades penitenciarias, que se investigue lo conducente, para que se deslinde la responsabilidad administrativa propia del Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo, Zacatecas. Por lo que, en el ámbito de su competencia, la Dirección General de Prevención y Reinserción Social del Estado de Zacatecas, deberá iniciar una investigación, efectiva, profunda e imparcial, de los actores

78 Voto razonado concurrente del Juez Sergio García Ramírez, a la Sentencia Dictada por la Corte IDH, en el Caso Bulacio Vs. Argentina del 18 de septiembre del 2003. Párr. 8.

que debieron intervenir y no lo hicieron; así como de las deficiencias sistémicas que crean los factores de riesgo para toda la población penitenciaria, y detonan en hechos lamentables, como el que es motivo de la presente Recomendación, así como colaborar en la investigación incoada por la Representación Social, dentro de la carpeta de investigación que se iniciara con motivo de los hechos que aquí se resuelven.

129. En lo concerniente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha sostenido que la determinación de responsabilidad penal o administrativa poseen, cada una, sus propias reglas sustantivas y procesales. Y que la falta de determinación de responsabilidad penal, en su caso, no debe impedir que se continúe con la averiguación de otros tipos de responsabilidades, tales como la administrativa[79]. Consecuentemente, debe cumplirse con la obligación que impone el artículo 1°, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se señala de manera contundente de todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, deben *de "promover, respetar, proteger y garantizar" los derechos humanos, de conformidad con los principios de "universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad",* y se establece la obligación del Estado de *"prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos".*

130. Lo anterior, implica que, todos los órganos del Estado, en el marco de las atribuciones que le son conferidas por la ley, están obligados a implementar programas encaminadas a prevenir violaciones a los derechos humanos y garantizar que sean efectivamente respetados. En el caso que nos ocupa, **VD†,** perdió la vida encontrándose bajo la custodia del Estado, producto de la insuficiencia o incapacidad del personal de seguridad y custodia del Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo, Zacatecas. Asimismo, dicha pérdida humana fue consecuencia de la falta de cámaras de vigilancia colocadas en todas y cada una de las áreas de dicho centro y, por ende, de personal encargado de su efectivo monitoreo. Por ello, es impostergable la investigación administrativa interna, que tienda a esclarecer la verdad de los hechos, a fin de determinar las condiciones en las cuales **VD†,** perdió la vida; y, en su caso sancionar el hecho concreto. Asimismo, es imperativo que se esclarezcan de manera precisa, las necesidades del centro de reclusión que propician o facilitan las condiciones de autogobierno o cogobierno, así como los servidores públicos que, al respecto, han sido omisos, para proceder contra ellos administrativa y, en su caso, penalmente.

131. Por lo tanto, con base en los argumentos y razonamientos vertidos a lo largo de la presente Recomendación, esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, tiene debidamente demostrado que, existió omisión en la seguridad y custodia en las estancias de los módulos, específicamente, en el módulo 1 del área de población, del Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo, Zacatecas, en fecha 21 de abril de 2021. Lo que trajo como consecuencia que **VD†,** persona privada de su libertad en dicho centro penitenciario, perdiera la vida, contraviniéndose así, lo mandatado en los instrumentos internacionales, interamericanos e internos, que han sido invocados a lo largo de la presente Recomendación. Y que se relacionan con el deber del Estado Mexicano, como garante de los derechos de sus gobernados y, en el caso particular, de las personas privadas de su libertad.

132. Motivo por el cual, el Ministerio Público deberá agotar todas las líneas de investigación dentro de la carpeta de investigación a su cargo, a efecto de que, en su caso, que se identifique al probable responsable de la muerte de **VD†,** éste sea procesado y, en su caso, sancionado penalmente por el órgano jurisdiccional correspondiente. Lo anterior, en virtud de que la investigación y sanción de los responsables, es parte fundamental del derecho de acceso a la justicia de las víctimas indirectas en los casos de violaciones a derechos humanos, en la especie de: **VI1**, **VI2**, **VI3, VI4, M1** y **M2,** según se describe en el apartado siguiente.

VII. DE LAS VÍCTIMAS INDIRECTAS.

79 Corte IDH, *Caso Mendoza y otros* vs. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones. Sentencia de 14 de mayo de 2013. Párr. 224.

El artículo 4°, párrafo segundo, de la Ley de Víctimas del Estado de Zacatecas, establece que, cuando como consecuencia de la comisión de un delito o de violaciones a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, se reconozca una víctima directa, se considerará así a los familiares o aquellas personas físicas a cargo de la víctima directa, que tengan una relación inmediata con ella; en ese entendido, considera como tal, al cónyuge, la concubina o el concubinario, las hijas e hijos de la víctima, los padres y los dependientes económicos de la víctima.

En el presente caso, esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas logró acreditar que **VD†** era hijo de **VI1** y **VI2**, y hermano de **VI3.**

Del mismo modo, este Organismo acreditó que, a pesar de estar separado, **VD†**, estaba casado con **VI4,** con quien procreó a **M1, M2** y **M3** (hoy occisa).

VIII. CONCLUSIONES DEL CASO.

1. Esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, reprueba la vulneración del derecho a la integridad personal y a la vida, en relación con el deber del Estado garante, respecto de la muerte de **VD†**, lo cual, es atribuible a la omisión del personal de seguridad y custodia, del Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo, Zacatecas, durante la guardia comprendida de las **19:30 horas del día 21 de abril de 2020, a las 01:30 horas del día 22 de abril de 2020**, bajo la dirección de la **DCP1**, entonces Directora del Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo, Zacatecas, de nombres **AR1, AR6, AR7, AR8, AR9, AR10, AR11, AR3, AR12, AR13, AR4, AR2, AR14, AR15, AR16, AR17, AR18, AR5, y AR19**.

2. Y de manera indirecta, a la Dirección de Prevención y Reinserción Social del Estado de Zacatecas, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública, en virtud de omitir la contratación de personal de seguridad y custodia, necesario para cubrir adecuadamente las guardias de 24 horas, en las diversas áreas del Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo, Zacatecas, así como la colocación de cámaras de vigilancia que sean suficientes para cubrir todas los zonas del centro que así lo requieren.

3. De ahí que, para este Organismo, resultó indudable establecer la responsabilidad por omisión, atribuible al personal de seguridad y custodia que se encontraba de turno, en el horario y día en que se suscitaron los hechos; y que, de acuerdo al informe rendido por la la **DCP1**, entonces Directora del Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo, Zacatecas, así como a las propias declaraciones de los elementos de seguridad y custodia, que rindieron testimonio ante este Organismo y ante la Representación Social, recae en la guardia comprendida entre las **19:30 horas del día 21 de abril de 2020, a las 01:30 horas del día 22 de abril de 2020.**

IX. REPARACIONES.

1. De conformidad con lo establecido en los artículos 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 51 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, al acreditarse violación a los derechos humanos de **VD†**, atribuible a servidores públicos estatales del Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo, la Recomendación formulada al respecto, debe incluir las medidas que procedan para lograr la efectiva restitución de las personas afectadas en sus derechos.

2. Dicha reparación, de conformidad con los Principios y Directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones", adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 2005, las violaciones de derechos humanos deben contemplar, de forma

apropiada y proporcional a la gravedad de ésta, una reparación plena y efectiva en las formas siguientes:, restitución, rehabilitación, satisfacción, indemnización, deber de investigar y garantías de no repetición. En el caso en concreto y ante la pérdida fatal, no es posible solicitar la restitución de los derechos humanos conculcados. Las reparaciones se contemplan también en la Ley General de Víctimas, en sus artículos 1, último párrafo, 7, fracción I y II, y particularmente en el texto legal del artículo 26, que establece que "Las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera oportuna, plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva por el daño que han sufrido como consecuencia del delito o hecho victimizante que las ha afectado o de las violaciones de derechos humanos que han sufrido, comprendiendo medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y medidas de no repetición", además por lo previsto en el artículo 27 del mismo ordenamiento legal.

3. La Corte ha señalado que los familiares de las víctimas de violaciones de derechos humanos pueden ser, a su vez, víctimas. Ha considerado violado el derecho a la integridad psíquica y moral de los familiares de las víctimas por el sufrimiento causado por las violaciones perpetradas contra sus seres queridos y las posteriores actuaciones u omisiones de las autoridades estatales, por ello, es de vital importancia que las víctimas reciban la valoración médica y psicológica necesaria para determinar los daños que sufrieron como consecuencia de la vulneración a sus derechos, a través de la vulneración de los derechos de su ser querido, en este caso, a favor de **VI1** y **VI2**, en su calidad de padres, de **VI3**, en su calidad de hermana; así como de **VI4,** en su calidad de esposa, y de **M1** y **M2**, en su calidad de hijos, según lo acreditó esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas.

A) De la indemnización.

1. La indemnización es una medida compensatoria que busca reparar los perjuicios económicamente evaluables que sean consecuencia de las violaciones a derechos humanos, entre los que se incluyen: el daño físico o mental; la pérdida de oportunidades, en particular las de empleo, educación y prestaciones sociales; los daños materiales y la pérdida de ingresos, incluido el lucro cesante; los perjuicios morales; los gastos de asistencia jurídica o de expertos, medicamentos y servicios médicos, psicológicos y sociales.

2. En el caso motivo de esta Recomendación, resulta procedente el pago de una indemnización, a favor de las víctimas indirectas, que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 4 fracción I y II, de la Ley de Atención a Víctimas del Estado de Zacatecas, correspondería a **VI1** y **VI2**, en su calidad de padres, de **VI3**, en su calidad de hermana; así como de la **VI4,** de **M1** y **M2**, en su calidad de esposa e hijos; quienes deberán inscribirse en el Registro Estatal de Víctimas, a fin de que tengan acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, previsto en la Ley de Atención a Víctimas del Estado de Zacatecas.

B) De la rehabilitación.

1. Las medidas de rehabilitación buscan reducir los padecimientos físicos y psicológicos de las víctimas, a través del otorgamiento de servicios de atención médica, psicológica, jurídica y social que éstas requieran[80].

2. La presente reparación debe "incluir la atención médica y psicológica, así como servicios jurídicos y sociales."[81], en ese contexto, las medidas de rehabilitación buscan reducir los padecimientos físicos y psicológicos de las víctimas, a través del otorgamiento de servicios de atención médica, psicológica, jurídica y social que éstas requieran.

3. En atención a que, en el caso en concreto se advierte que los familiares estuvieron expuestos a un evento emocional traumático, por lo que no se descarta un daño psicológico producto de los hechos de la indebida actuación de los servidores públicos involucrados, en consecuencia, se considera necesario se brinde atención psicológica especializada en tanatología a las siguientes personas: **VI1** y **VI2**, en su calidad de padres, de **VI3**, en su

80Ibid., Numeral 21.

81 Ídem, párr. 21.

calidad de hermana; así como de **VI4,** de **M1** y **M2**, para enfrentar consecuencias psíquicas que pudiera tener, a raíz del fallecimiento de **VD†.**

C) De las medidas de satisfacción.

1. La satisfacción cuando sea pertinente y procedente deberá incluir la totalidad o parte de las medidas siguientes:

a) Medidas eficaces para conseguir que no continúen las violaciones;

b) La verificación de los hechos y la revelación pública y completa de la verdad, en la medida en que esa revelación no provoque más daños o amenace la seguridad y los intereses de la víctima, de sus familiares, de los testigos o de personas que han intervenido para ayudar a la víctima o impedir que se produzcan nuevas violaciones;

c) La búsqueda de las personas desaparecidas, de las identidades de los niños secuestrados y de los cadáveres de las personas asesinadas, y la ayuda para recuperarlos, identificarlos y volver a inhumarlos según el deseo explícito o presunto de la víctima o las prácticas culturales de su familia y comunidad;

d) Una declaración oficial o decisión judicial que restablezca la dignidad, la reputación y los derechos de la víctima y de las personas estrechamente vinculadas a ella;

e) Una disculpa pública que incluya el reconocimiento de los hechos y la aceptación de responsabilidades;

f) **La aplicación de sanciones judiciales o administrativas a los responsables de las violaciones**;

g) Conmemoraciones y homenajes a las víctimas;

h) **La inclusión de una exposición precisa de las violaciones ocurridas en la enseñanza de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, así como en el material didáctico a todos los niveles**.[82]

2. En relación a la presente reparación, resultan pertinentes y procedentes, las señaladas en los incisos a), f) y h), esto es, que como medidas eficaces para conseguir que no continúen este tipo de violaciones por omisión, deberá capacitarse al personal de seguridad y custodia del Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo, Zacatecas, para que se sujete a los protocolos que permitan realizar rondines, con mayor frecuencia a los internos, en la medida de detectar y evitar eventos homicidas, como el acontecido con **VD†.**

3. Asimismo, se inicien los procedimientos administrativos en contra de **AR1, AR6, AR7, AR8, AR9, AR10, AR11, AR3, AR12, AR13, AR4, AR2, AR14, AR15, AR16, AR17, AR18, AR5, y AR19**, quienes incurrieron en violaciones al derecho a la integridad y a la vida de las personas privadas de su libertad.

D) De las garantías de no repetición.

1. Las garantías de no repetición, son aquellas que se adaptan con el fin de evitar que las víctimas vuelvan a hacer objeto de violaciones a sus derechos humanos y, toda vez que los Derechos Humanos son universales, contribuyen a prevenir o evitar la repetición de actos de su misma naturaleza.

2. A fin de prevenir la violación de los derechos mencionados en párrafos precedentes, resulta indispensable que el Centro de Regional de Reinserción Social de Fresnillo, Zacatecas, realicen los trámites correspondientes ante las instancias respectivas, a efecto de obtener y contar con los recursos mínimos indispensables, suficientes y eficaces, para el debido funcionamiento del Sistema Penitenciario, como son: personal técnico, administrativo, profesional y penitenciario suficiente para cubrir todos los servicios y horarios; y con ello,

82 Ídem, párr. 22.

cumplir con su obligación de Estado garante de la integridad física y la vida de los internos que están bajo su custodia. Para tal consecución, se deberá buscar la contratación de mayor personal de seguridad y custodia, la colocación de cámaras en todas las áreas del centro, incluyendo su debido monitoreo, de manera constante e ininterrumpida.

3. Asimismo, deberán implementarse programas de capacitación dirigidos al personal directivo y administrativo, de seguridad y custodia, así como del área médica y psicológica en materia de derechos humanos, específicamente en el Derecho a la integridad personal y a la vida, en relación con el deber del Estado garante de las personas privadas de su libertad, así como en el Protocolo Nacional de Actuación Primer Respondiente, en el Protocolo de Policía con capacidades para procesar el lugar de la intervención y de la Guía Nacional de Cadena de Custodia, a efecto de que les permitan identificar las acciones u omisiones que vulneran los citados derechos en perjuicio de las personas privadas de libertad, a fin de incidir en la erradicación de éstas.

X. RECOMENDACIONES.

Por todo lo anteriormente expuesto, y con fundamento en los 1 y 102 apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 2, 3, 4, 8, 17, 37, 51, 53, 54, 56, 57 y 58 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas se emiten las siguientes Recomendaciones:

PRIMERA. En un plazo máximo de un mes, posterior a la notificación de esta Recomendación, se inscriba en el Registro Estatal de Víctimas a **VD†**, en calidad de víctima directa de violaciones a derechos humanos, así como a **VI1** y **VI2**, en su calidad de padres, de **VI3**, en su calidad de hermana; así como de **VI3, M1** y **M2,** en su calidad de esposa e hijos, en calidad de víctimas indirectas, a fin de que tengan acceso a los servicios y al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, previstos en la Ley de Atención a Víctimas del Estado de Zacatecas; remitiendo a esta Comisión Estatal, las constancias con que se acredite su cumplimiento.

SEGUNDA. Dentro del plazo máximo de un mes, contado a partir de la aceptación de esta resolución se localice a las víctimas indirectas de **VD†**, a fin de que manifiesten si es su deseo recibir atención psicológica y tanatológica, relacionada con los hechos de la presente queja. De ser el caso, en un plazo de un mes, posterior a ello, se inicie su tratamiento hasta su total restablecimiento, remitiendo a este Organismo, las constancias que acrediten su cumplimiento.

TERCERA. En un plazo máximo de seis meses, contado a partir de la aceptación de la presente Recomendación, se incremente el personal de seguridad y custodia del Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo, Zacatecas, concretamente en los módulos del área de población y de monitoreo del circuito cerrado de videovigilancia, para que se garantice la protección y seguridad de los internos de dicho centro penitenciario, debiendo enviarse a este Organismo, las constancias de cumplimiento.

CUARTA. En un plazo máximo de seis meses, contado a partir de la aceptación de la presente Recomendación, se realicen las gestiones necesarias ante el área correspondiente, a fin de que se dote de los dispositivos necesarios de videograbación, que cubran todas las áreas del Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo, Zacatecas, con el objetivo de impactar de manera adecuada, en la vigilancia de los internos, y con ello cumplir con la obligación de salvaguardar la integridad y la vida de las personas privadas de la libertad, mediante una eficaz supervisión, vigilancia y custodia. Debiendo enviarse a este Organismo, las constancias de cumplimiento.

QUINTA. En un plazo máximo de tres meses, contados a partir de la aceptación de la presente Recomendación, se acredite la capacitación del personal directivo y administrativo, de seguridad y custodia, así como del área médica y psicológica, adscritos al Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo, en el Derecho a la integridad personal y a la vida, en relación con el deber del Estado garante de las personas privadas de su libertad, así

como en el Protocolo Nacional de Actuación Primer Respondiente, en el Protocolo de Policía con capacidades para procesar el lugar de la intervención y de la Guía Nacional de Cadena de Custodia, a efecto de que les permitan identificar las acciones u omisiones que vulneran los citados derechos en perjuicio de las personas privadas de libertad, a fin de incidir en la erradicación de dichas conductas.

SEXTA. Dentro de un plazo máximo de un mes, contado a partir de la aceptación de esta Recomendación, se instruya al Órgano Interno de Control o a la Unidad de Asuntos Internos, de la Secretaría de Seguridad Publica de Zacatecas, para que proceda a realizar el procedimiento interno de responsabilidad administrativa que corresponda en contra de **AR1, AR6, AR7, AR8, AR9, AR10, AR11, AR3, AR12, AR13, AR4, AR2, AR14, AR15, AR16, AR17, AR18, AR5, y AR19**, personal del Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo, Zacatecas, quienes incumplieron con la obligación de salvaguardar el derecho a la integridad y a la vida de **VD†**.

SÉPTIMA. En un plazo máximo de tres meses, contados a partir de la aceptación de la presente Recomendación, se implemente, por la Dirección del Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo, Zacatecas, un programa constante de supervisión interna, que tenga como finalidad garantizar la seguridad de las personas privadas de su libertad, de los visitantes y del personal que ahí labora, procurando en consecuencia que, el personal, sea suficientemente numeroso y mantenga una proximidad suficiente para garantizar la seguridad de todos los detenidos presentes en el área de alojamiento de que se trate, durante las 24 horas del día, debiendo enviarse a este Organismo, las constancias de cumplimiento.

OCTAVA. En un plazo máximo de seis meses, contados a partir de la aceptación de la presente Recomendación, se realicen los trámites correspondientes, ante las instancias competentes, a efecto de contar con el personal técnico, administrativo y de seguridad y custodia necesario para garantizar de manera eficiente y eficaz, el funcionamiento de las diferentes áreas del Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo, Zacatecas, de manera que se garantice su supervisión permanente, es decir, en todos los servicios y horarios, y con ello, se de cumplimiento a la obligación de Estado garante, de salvaguardar la integridad y a la vida de los internos que están bajo su custodia.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 53, párrafo segundo de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, se hace del conocimiento de la autoridad a la que va dirigida esta Recomendación, que dispone de un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente en que ésta se le notifique, para que manifieste si la acepta o no, en el entendido de que, de no aceptarla, su respuesta se hará del conocimiento de la opinión pública. En caso de que la acepte, se le notifica que dispone de un plazo de 15 días, contados a partir del vencimiento del término del que disponía para responder sobre la aceptación, a fin de enviar las pruebas de su cumplimiento.

Así lo determina y firma

DRA. EN D. MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOS
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE ZACATECAS

Expediente: CDHEZ/107/2019

Persona quejosa: Q.

Persona agraviada: A.

Autoridades responsables:

I. Elementos de la Policía Estatal Preventiva de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas.

Derechos humanos violentados:

I. Derecho a la integridad y seguridad personal, en relación con el derecho a la integridad física y psicológica.

Zacatecas, Zacatecas, a 09 de diciembre de 2021, una vez concluida la investigación de los hechos que motivaron el expediente CDHEZ/107/2019, y analizando el proyecto presentado por la Primera Visitaduría, la suscrita aprobó, de conformidad con los artículos 4, 8 fracción VII, 17 fracción V, 37, 51, 53 y 56 de la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, en relación con lo dispuesto por los numerales 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 y 175 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, la presente **Recomendación número 55/2021,** que se dirige a la autoridad siguiente:

C. **AR** Secretario de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas, por hechos ocurridos durante la gestión del **AR1**, entonces Secretario de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas.

I. DE LA CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

1. De conformidad con los artículos 6°, apartado A., fracción II y 16, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 23 y 85 de la Ley de Trasparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, los datos personales del agraviado, así como aquellos relativos a la vida privada y familiar, relacionadas con esta resolución, permanecen confidenciales, ya que éstos no son públicos.

II. RELATORÍA DE LOS HECHOS Y OBJETO DE LA CONTROVERSIA

1. El 12 de marzo de 2019, se presentó formal queja por **Q,** en favor de **A,** por actos presuntamente violatorios de sus derechos humanos, de conformidad con los artículos 30, 31 y 32 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, en contra de los Elementos de Policía Estatal Preventiva, de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas.

Por razón de turno, el 12 de marzo de 2019, se remitió el escrito de queja a la Primera Visitaduría, bajo el número de expediente citado al rubro, a efecto de formular el acuerdo de calificación de ésta, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 del Reglamento Interno de esta Comisión.

En consecuencia, el día 15 de marzo de 2019, la queja se calificó como de presunta violación al derecho a la integridad y seguridad personal en relación con el derecho a la integridad física y psicológica, de conformidad con lo establecido por el artículo 124 fracción I, del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas.

2. Los hechos materia de la queja consistieron en lo siguiente:
La quejosa **Q** hizo consistir su inconformidad, en contra de los Elementos de la Policía Estatal Preventiva, por haber golpeado y disparado un arma de fuego en contra de su esposo **A,** en el municipio de Calera de Víctor Rosales, habiendo quedado este herido e inconsciente, por lo que tuvo que ser trasladado al Hospital General para recibir atención médica.

3. La autoridad involucrada rindió el informe correspondiente:
- El 27 de marzo de 2019, el Inspector General **AR2**, entonces Director de la Policía Estatal Preventiva, rindió informe con motivo de los hechos motivo de la queja.

III. COMPETENCIA

1. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, es competente, en los términos de los artículos 1°, 4°, 6°, 8° fracción VII, inciso A) y 31 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, en relación con los numerales 15, 22 y 23 de su Reglamento Interno, en razón de que la queja se promueve en contra de Elementos de la Policía Estatal Preventiva de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas.

2. De conformidad con los artículos 123 y 124 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, este Organismo advierte que de los hechos se puede presumir la violación de los derechos humanos de **A,** así como la probable responsabilidad de los servidores públicos adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas.

3. Esta comisión presumió la violación de los siguientes derechos:
I. Derecho a la integridad y seguridad personal, en relación con el derecho a la integridad física y psicológica.

IV. PROCEDIMIENTO ANTE LA COMISIÓN

Con la finalidad de documentar las presuntas violaciones a derechos humanos, así como para determinar la existencia o no de responsabilidad por parte de los servidores públicos señalados, este Organismo realizó entrevistas a las personas relacionadas con los hechos, se recabaron comparecencias de elementos de la Policía Estatal Preventiva, así como de elementos de Protección Civil y Bomberos de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas, se solicitaron informes de autoridad así como en vía de colaboración y se consultó expediente clínico y carpeta de investigación relacionados con los hechos.

V. PRUEBAS

Con base en lo estipulado en los artículos 48 y 49 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, en relación con los numerales 150, 151, 152, 153 y 154 del Reglamento Interior de este Organismo, durante el procedimiento realizado por esta Institución se recabaron los elementos probatorios documentales, remitidos tanto por la agraviada como por la autoridad señalada como responsable, así como las declaraciones de los servidores públicos, y testigos, además de las que remitieron las autoridades que tuvieron conocimiento de los hechos, en colaboración, así como las declaraciones de testigos, los cuales fueron necesarios para emitir la resolución correspondiente.

VI. SOBRE LOS DERECHOS VULNERADOS

Derecho a la integridad y seguridad personal en relación con el derecho a la integridad física y psicológica.

1. A partir del 10 de junio de 2011, cuando se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, las reformas en materia de Derechos Humanos a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; además con el reconocimiento que expresó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a que a partir de dicha reforma se reconocen un conjunto de derechos fundamentales cuyas fuentes son la Constitución y otros tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano sea parte, se desprende que las normas de derechos humanos, con independencia de su fuente, no se relacionan en términos jerárquicos. Así, la transformación en esta materia que ha venido aconteciendo en nuestro país se explica por la ampliación de derechos humanos previstos en la Constitución. En este sentido, los derechos humanos, vistos en su conjunto, son el parámetro de control de regularidad constitucional, conforme el cual debe regirse el actuar de toda autoridad gubernamental.

2. En el contexto de la presente resolución, corresponde ahora dedicar este apartado al análisis de la vulneración al derecho humano a la integridad personal, para lo cual se avocaron las investigaciones en la integración de la queja que ahora nos ocupa, por lo que conviene preliminarmente hacer una referencia jurídica respecto de los elementos que componen este derecho, así como los preceptos legales que le contemplan, citando aquellos criterios jurisprudenciales, tanto del orden nacional como del internacional que resultan pertinentes.

3. El derecho a la integridad personal es aquél que tiene todo sujeto para no sufrir tratos que afecten su estructura corporal, sea física, fisiológica o psicológica, o cualquier otra alteración en el organismo que deje huella temporal o permanente, que cause dolor o sufrimiento grave con motivo de la injerencia o actividad dolosa o culposa de un tercero.[1]

4. El respeto al derecho a la integridad personal se refiere, más específicamente, a la prerrogativa que tiene toda persona a que se le permitan hacer efectivas las condiciones jurídicas, materiales, de trato, acordes con las expectativas en un mínimo de bienestar reconocidas por el orden jurídico. Implica un derecho para el titular que tiene como contrapartida la obligación de todo servidor público de omitir las conductas que vulneren esas condiciones de privilegio, particularmente los tratos humillantes, vergonzosos o denigrantes, que coloquen a la persona en esta condición de no hacer efectivos sus derechos, teniendo como bien jurídico protegido un trato respetuoso dentro de las condiciones mínimas de bienestar.[2]

5. A mayor abundamiento, el derecho a la integridad personal es aquél que tiene toda persona para no sufrir actuaciones que afecten su estructura corporal, sea física, fisiológica o psicológica o cualquier otra alteración en el organismo que deje huella temporal o permanente, que cause dolor o sufrimientos graves con motivo de la injerencia o actividad dolosa o culposa de un tercero.

6. El derecho a la integridad y seguridad personal, se encuentra reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 3; Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, artículo 1º, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, numeral 9, que señalan el derecho de toda persona a la vida, a la libertad y a la seguridad personal.

7. También se encuentra previsto este derecho, en los artículos 5.1 y 5.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el primero establece que el derecho de toda persona a que se respete su integridad física, psíquica y moral, y el segundo prohíbe que las personas sean sometidas a torturas, penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. De igual forma, las personas privadas de libertad, serán tratadas con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.

8. Los derechos a la vida y a la integridad personal revisten un carácter angular en la Convención. De conformidad con el artículo 27.2 del referido instrumento, esos derechos forman parte del núcleo inderogable, pues se encuentran consagrados como unos de los que no pueden ser suspendidos en casos de guerra, peligro público u otras amenazas a la independencia o seguridad de los Estados Partes.[7]

9. El artículo 1°, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece la obligación que tienen todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Consecuentemente, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos establecidos por la ley. El derecho a la integridad personal se garantiza en la última parte del artículo 19 Constitucional, cuando establece como abusos que deben ser reprimidos por las leyes, el maltrato en las aprehensiones o detenciones, así como la molestia en las cárceles o toda gabela o contribución, los cuales deben ser sancionados por las autoridades.

10. A su vez, el artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconoce que, aun en casos de restricción o suspensión de derechos por motivos de "invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto", no podrá restringirse el derecho a la integridad personal, por lo que se destaca la importancia que guarda este derecho aún en cuestiones tan excepcionales como los casos de restricción o suspensión de derechos.

11. De igual manera, esta garantía permite a la persona hacer efectivas las condiciones jurídicas, materiales y de trato, acordes con las expectativas en un mínimo de bienestar reconocidas por el orden jurídico, el cual tiene como contrapartida la obligación de todo servidor público de omitir las conductas que vulneren esas condiciones de privilegio, particularmente los tratos humillantes, vergonzosos o denigrantes y especialmente de tortura[3].

12. El Comité de Derechos Humanos, el cual supervisa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en la Observación General 20, de 10 de marzo de 1992, dispuso que el derecho a la integridad personal protege a los individuos de daños físicos o mentales provocados o que puedan ser ocasionados por una multiplicidad de acciones y omisiones tanto de las autoridades que hagan uso de sus potestades públicas, de las autoridades que no se encuentren investidas en ese momento de su cargo público, así como de los actos de entes particulares.

13. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha sostenido que: "[...] Todo uso de la fuerza que no sea estrictamente necesario por el propio comportamiento de la persona detenida constituye un atentado a la dignidad humana [...] en violación del artículo 5 de la Convención Americana [...]"[4].

14. La citada Corte Interamericana, ya ha establecido que "[la] infracción del derecho a la integridad física y psíquica de las personas es una clase de violación que tiene diversas connotaciones de grado y que abarca desde la tortura hasta otro tipo de vejámenes o tratos crueles, inhumanos o degradantes cuyas secuelas físicas y psíquicas varían de intensidad según los factores endógenos y exógenos que deberán ser demostrados en cada situación concreta".[5] Los primeros se refieren a las características del trato, tales como la duración, el método utilizado o el modo en que fueron infligidos los padecimientos, así como los efectos físicos y mentales que éstos pueden causar. Los segundos remiten a las condiciones de la persona que padece dichos sufrimientos, entre ellos la edad, el sexo, el estado de salud, así como toda otra circunstancia personal.[6]

15. Esta Corte, ha considerado de forma constante en su jurisprudencia que dicha prohibición pertenece hoy día al dominio del *ius cogens*. El derecho a la integridad personal no puede ser suspendido bajo circunstancia alguna.[8] Dicha prohibición es absoluta e inderogable, aún en las circunstancias más difíciles, tales como guerra, amenaza de guerra, lucha contra el terrorismo y cualesquiera otros delitos, estado de sitio o de emergencia, conmoción o conflicto interior, suspensión de garantías constitucionales, inestabilidad política interna u otras emergencias o calamidades públicas.[9] De este modo, si la prohibición de cualquier acto que represente una vulneración a este derecho se debe respetar incluso en situaciones tan excepcionales como las ya mencionadas, con mayor razón en aquellos casos en los que no exista ninguna circunstancia que justifique la lesión a tal garantía.

16. Por otro lado, es de gran importancia que el uso de la fuerza por parte de los policías que la ejerzan con el propósito de salvaguardar la integridad, derechos y bienes de las personas, preservar las libertades, el orden y la paz públicos o prevenir la comisión de delitos, así como infracciones a las disposiciones administrativas estatales y municipales sea en el marco de la legalidad y del respeto a los derechos humanos de todas las personas. Lo anterior aplica independientemente de la corporación a la que pertenezcan y la instancia de gobierno en la que sirvan.

17. Asimismo, la fuerza deberá ser el último recurso empleado y ésta se realizará observando la estricta necesidad, la oportunidad, la proporcionalidad, la racionalidad y legalidad, pues el uso legítimo de la fuerza, es "la aplicación racional, congruente, oportuna y con respeto a los derechos humanos de técnicas, tácticas y métodos de sometimiento por los cuerpos policiales sobre las personas que oponen resistencia a una detención que se lleva a cabo en cumplimiento del deber, ya sea que se trate de algún caso de flagrancia, caso urgente o en ejecución de una orden judicial o que se emplee en casos de legítima defensa."[1]

18. Así, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha determinado que: **"**Tratándose de detenciones en que las autoridades emplean la fuerza pública, los funcionarios encargados de aplicarla deben respetar determinados derechos y garantías para considerar que actúan dentro de un marco de legalidad, de modo que aquélla no implique una violación del derecho a la integridad personal del detenido. Por lo tanto, las limitaciones a este derecho deben ser fundamentadas de manera adecuada y absolutamente excepcionales, en las que en todo momento deben respetarse los siguientes deberes: a) el empleo de la fuerza estrictamente necesaria para el fin buscado debe realizarse con pleno respeto a los derechos humanos del detenido; b) los funcionarios facultados para llevar a cabo la detención deben estar debidamente identificados; c) deben exponerse las razones de la detención, lo cual incluye no sólo el fundamento legal general del aseguramiento sino también la información de los suficientes elementos de hecho que sirvan de base a la denuncia, como el acto ilícito comentado y la identidad de la presunta víctima; en ese sentido, por razones se entiende la causa oficial de la detención y no las motivaciones subjetivas del agente que la realiza; d) debe establecerse claramente bajo la responsabilidad de cuáles agentes es privado de la libertad el detenido, lo cual impone una clara cadena de custodia; e) debe verificarse la integridad personal o las lesiones de la persona detenida; y f) debe constar en un documento la información completa e inmediata de la puesta a disposición del sujeto detenido ante la autoridad que debe calificar su detención".[2]

19. El Código para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, señala que los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, podrán usar la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesario y en la medida en que lo requiera el desempeño de sus tareas, por ser considerada como una medida extrema, excluyendo en lo posible su uso especialmente contra niños. En general, no deberán emplearse armas de fuego excepto cuando un presunto delincuente ofrezca resistencia armada o ponga en peligro de algún otro modo, la vida de otras personas y no pueda reducirse o detenerse al presunto delincuente aplicando medidas menos extremas. En todo caso en que se dispare un arma de fuego, deberá informarse inmediatamente a las autoridades competentes.

20. Los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, señalan el deber de los gobiernos y organismos encargados de hacer cumplir la ley, de adoptar y aplicar normas y reglamentos sobre el empleo de la fuerza y armas de fuego contra personas, por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley; de examinar consecutivamente las cuestiones éticas relacionadas con estos medios; de establecer métodos amplios y dotar a los funcionarios de diversas armas y municiones de forma que se pueda hacer uso diferenciado de estos elementos, pudiendo emplear en caso que así lo requiera, armas incapacitantes no letales, con el ánimo de limitar el uso de medios mortíferos, y de que éstos funcionarios cuenten con el equipo y medios de transporte blindado que contribuya a restar el uso de cualquier tipo de

1 Nuevo Protocolo del Uso Legítimo de la Fuerza en México, disponible [en línea] http://blogs.periodistadigital.com/hermosillo.php/2012/04/24/p314342, fecha de consulta 05 de septiembre de 2017.

2 Tesis: 1ª. CCLXXVI/2015, Primera Sala, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 23, Octubre de 2015, Tomo II, décima época, página 1652, Tesis aislada Constitucional.

armas, justipreciando su tipo y minimizando el riesgo de afectación a personas distintas, controlando el uso de esas armas. Así como las medidas legales para punir estas conductas cuando sean, abusivas o arbitrarias su uso por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.[3]

21. Establecen también, que no se utilizarán medios violentos y que sólo ante la ineficiencia o falta de garantía de otros medios para obtención del logro contemplado, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, recurrirán al uso de la fuerza y armas de fuego, cuando sea inevitable, actuando en proporción y con moderación, respetando y protegiendo la vida de las personas, a quienes se les brindará asistencia y servicios médicos en caso de que resulten heridas o afectadas, informándolo de inmediato a los parientes o amigos íntimos de aquellas, y de inmediato a sus superiores. El quebrantamiento de estos principios no se justifica bajo ninguna circunstancia pública o o de política interna.[4]

22. El Principio 9, de esos Principios Básicos, niega el uso de armas de fuego contra las personas, por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, y sólo como excepción, en legítima defensa de su persona o de otras, cuando exista peligro inminente de muerte o lesiones graves, o con el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una serie amenaza para la vida, o con el objeto de detener a una persona que represente ese peligro y oponga resistencia a su autoridad o para impedir su fuga y sólo en caso de que resulten insuficientes medidas menos extremas para lograr dichos objetivos, se puede justificar su uso, previa identificación de los funcionarios y una advertencia clara de su utilización, con tiempo suficiente si esto es posible y no exista peligro ni riesgo para ellos o para otras personas. En todo momento que sea necesario preservar una vida, se pueden usar armas letales

23. De la misma manera, los Principios Básicos señalan que la legislación y los protocolos sobre el uso de armas de fuego, por estos funcionarios, deben especificar las circunstancias en que los funcionarios están autorizados a portar armas de fuego, y el tipo de armas y municiones autorizadas, asegurar que las armas de fuego que se utilizan solamente sea en circunstancias apropiadas de tal manera que disminuyan los daños y riesgos innecesarios, prohibiendo su empleo así como el de municiones que puedan provocar lesiones no deseadas o signifiquen un riesgo injustificado. Señalar que los avisos de advertencia deben darse siempre que proceda, cuando se vaya a hacer uso de un arma de fuego; y cuando se recurra al empleo de estas armas de fuego en el desempeño de sus funciones por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, se debe establecer un sistema de presentación de informe, así como la regulación del control, almacenamiento y distribución de las armas de fuego y los procedimientos que aseguren que estos funcionarios respondan por ellas o por las municiones que se les hayan entregado.[5]

24. Ahora bien, el uso o amenaza con arma, se da cuando la persona que tiene el arma la usa contra sí mismo o contra otra persona, y cuando los servidores públicos o autoridades abusan del poder que tienen, vulnerando o negando los derechos de las personas, o incluso, cuando amenazan con negarlos, se da una violación de derechos humanos.

25. Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, considera entre otras, como amenazas letales inminentes, las siguientes acciones: acción de apuntar con el cañón de un arma de fuego o una réplica de la misma a una persona; la acción de no soltar un arma de fuego o una réplica de la misma después de una advertencia clara; la acción de disparar un arma de fuego.[6]

26. Este Ordenamiento Nacional, establece en su artículo 11, los niveles del uso de la fuerza según el orden que deben agotarse son:

I. Presencia de autoridad: es la primera forma de contacto que tienen los agentes con la ciudadanía en general, se manifiesta a través de:
   a) El uso adecuado del uniforme;

---

3 Los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, principios 1, 2, 3 y 7.

4 Ibidem, principios 5, incisos a), b), c) y d), 6 y 8.

5 Ibid, principio 11 incisos, a), b), c), d) e) f)

6 Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, artículo 7, fracciones I, II y IV.

b) El uso adecuado de equipo, acorde a las circunstancias, y
c) Una actitud diligente.

II. Persuasión o disuasión verbal: a través de uso de palabras o gesticulaciones que sean catalogadas como órdenes y que permitan a la persona facilitar a los agentes a cumplir con sus funciones.
III. Reducción física de movimientos: Mediante acciones cuerpo a cuerpo a efecto de que se controle a la persona que se ha resistido y ha obstaculizado que los agentes cumplan con sus funciones;
IV. Utilización armas incapacitantes menos letales o a fin de someter la resistencia activa de una persona; y
V. Utilización de armas de fuego o de fuerza letal; para repeler la resistencia de alta peligrosidad.

27. Asimismo, este Ordenamiento señala que el uso de la fuerza sólo se justifica, cuando la resistencia o agresión es real, es decir si la agresión se materializa, no admite hechos hipotéticos ni imaginarios; actual, esto es, cuando dicha agresión se presenta en el mismo momento del hecho, no con anterioridad o posterioridad, e inminente, si la agresión está próxima a ocurrir y, de no realizarse una acción, ésta se consumaría. Establece además que, el uso de la fuerza letal será el último recurso en cualquier operativo. En su caso los agentes deberán comprobar que la agresión era real, actual, inminente, sin derecho, que ponía o podría poner en peligro la vida o integridad física de las personas ajenas o de uno de ellos y que el uso de la fuerza en los niveles referidos en las fracciones I a la IV del artículo 11, eran insuficientes para repeler, contrarrestar o neutralizar los actos de resistencia.[7]

28. La Ley de Instituciones Policiales de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas, define el “uso legítimo de la fuerza”, como el empleo de técnicas, tácticas, procedimientos estandarizados y métodos ajustados a los distintos niveles de fuerza que puedan ser empleados sobre las personas, de conformidad con las disposiciones de esta ley, los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, así como el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley ambos adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas. La cual se realizará estrictamente en la medida que lo requiera el ejercicio de las funciones de los elementos policiales debiendo cumplir con los principios de Racionalidad, Legalidad, Necesidad, Proporcionalidad, Congruencia, Oportunidad y Eficiencia. Los elementos policiales deben emplear medios pacíficos para disuadir a probables delincuentes o infractores, pudiendo emplear la fuerza física, en caso de ineficiencia de las medidas, de persistir la conducta o presentar resistencia.[8]

29. También establece que: “el elemento policial sólo podrá emplear las armas de cargo en contra de las personas, para evitar la comisión de un delito que entrañe una seria amenaza, real, actual e inminente para la vida o la integridad física propia o de una persona o más personas; ante la inminente agresión que ponga en peligro la vida o la integridad física propia o de una persona o más personas; y, para detener a un probable delincuente que habiendo emprendido la fuga, y por la naturaleza de los hechos probablemente constitutivos de delito en que se hubiere dado su presunta participación represente peligro para la vida o la integridad física de una o más personas”.[9]

30. Previo al uso del arma de cargo en contra de una o más personas, el elemento deberá advertir que se hará uso de la misma, si persiste la conducta o se resiste al cumplimiento de las funciones policiales, siempre y cuando las circunstancias lo permitan y ello no entrañe un peligro el riesgo de que el presunto delincuente cometa actos en contra de su vida o la integridad física del delincuente policial o de otras personas. 90. En el desempeño de sus funciones, las Instituciones Policiales podrán utilizar la fuerza y armas de fuego solamente cuando otros medios resulten ineficaces o no garanticen de ninguna manera el logro del resultado previsto.[10]

---

7 Ibídem, artículos 12 fracciones I, II, III y 13.

8 Artículos 85 y 86 de la Ley de Instituciones Policiales de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas.

9 Ibidem, artículo 87 fracciones I, II, III.

10 Ibid.

31. Asimismo, señala que cuando el empleo de las armas de fuego sea inevitable, los elementos policiales encargados de hacer cumplir la ley, ejercerán moderación y actuarán en proporción a la gravedad del delito y al objetivo legítimo que se persiga; reducirán al mínimo los daños y lesiones, asimismo respetarán y protegerán la vida humana y se notificará lo sucedido sin dilación alguna a los familiares de las personas heridas o afectadas. Además, las instituciones policiales, en el ejercicio de sus funciones podrán hacer uso de sus armas en forma racional y proporcional para asegurar la defensa oportuna de las personas o derechos de terceros o de los propios.[11]

32. Los elementos policiales se encuentran obligados a realizar un informe a su superior, detallado y pormenorizado en aquellos casos en que por motivo de sus funciones se vean en la necesidad de hacer uso de la fuerza o de armas de fuego, en este último caso se deberá especificar: a) las circunstancias especiales por las cuales fue necesario el uso del arma de fuego; b) marca, modelo y matrícula de serie del arma de fuego utilizadas, c) número de cartuchos percutidos; d) nombre de las personas lesionadas o privadas de la vida y e) daños materiales causados. Informe que serán públicos y se usarán para proponer acciones de mejoras en el uso de la fuerza y se utilizarán para el desarrollo de las prácticas de ese medio, por lo que en cualquier momento deberán ser proporcionados a los Organismos defensores de derechos humanos en la investigación de estos hechos. En caso de que se determine exceso en el uso de la fuerza, el superior jerárquico turnará el expediente a la Unidad de Asuntos Internos, para que se lleve a cabo la investigación de los hechos y se finquen las responsabilidades administrativas a que haya lugar y se hagan del conocimiento los hechos de la autoridad competente.[12]

33. En adición, la citada ley establece que se deberá preservar el lugar de los hechos, por los elementos policiales hasta el arribo de la autoridad competente, para la recolección y embalaje de los objetos que constituyan indicios sobre la mecánica de las acciones, con el fin de que se encuentren en aptitud la legitimidad o ilegitimidad de la fuerza empleada. Cuando los elementos policiales no adopten todas las medidas a su disposición para hacer uso lícito de la fuerza pública, se les iniciará la investigación respectiva por la Unidad de Asuntos Internos, en términos de las disposiciones legales aplicables, sin óbice de que sean acreedores de acuerdo con su participación, a la responsabilidad a que diere lugar, sea administrativa, civil o penal. La Secretaría tendrá la obligación de emitir protocolos especializados en los que se contengan directrices específicas para los distintos casos en que se debe emplear el uso de la fuerza atendiendo a los recursos materiales, técnicos y humanos, recursos para la implementación de los operativos para tales fines.[13]

34. Los Principios Básicos sobre el empleo de la Fuerza y de las Armas de fuego, por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, han sido utilizados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para determinar los límites al uso de la fuerza. A partir de este Instrumento Internacional ha señalado que los agentes Estatales no pueden usar armas contra personas, salvo en los siguientes supuestos: - Defensa propia. - Defensa de otras personas. - En caso de un peligro inminente de muerte o lesiones graves. - Con el fin de evitar la comisión de un delito grave que ponga en peligro el derecho a la vida. – Con el propósito de detener a una persona que representa un peligro y que oponga resistencia para impedir su fuga.

35. Los anteriores supuestos habilitan a los agentes Estatales al uso de armas de fuego contra otras personas, pero solamente en caso de que medidas menos extremas sean insuficientes, es decir, la regla general es que el uso de la fuerza letal y las armas de fuego por parte de los agentes de seguridad estatal, está prohibido. Cuando los Agentes Estatales con facultades para hacer uso de la fuerza se encuentren en casos de excepción señalados con antelación y vayan a usar armas de fuego, están obligados a tomar las siguientes medidas, con la finalidad de evitar confusión e inseguridad: I. Identificarse como Agentes Estatales. 2. Advertir claramente sobre su intención de usar armas de fuego.

---

11 Íbid. artículos 93 fracciones I, II y IV y 94.

12 Ibid, artículos 95 y 97.

13 Ibid, artículos 98, 99 y 100.

36. Los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública, tienen entre otras, obligaciones principales, conducirse con apego al orden jurídico y respeto a los derechos humanos y sus garantías constitucionales en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte y en la Constitución Política del Estado y velar por la vida y la integridad física de las personas detenidas; conforme lo dispone la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Zacatecas, con el objeto de garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.[14] Ley, que establece además, que siempre que se use la fuerza pública se hará de manera proporcional, racional, congruente, oportuna y con respeto a los derechos humanos, apegándose a las disposiciones normativas y administrativas aplicables y realizarla conforme a derecho.[15]

37. En el presente caso, se acreditó que los actos denunciados perpetrados por elementos de la Policía Estatal Preventiva, dependientes de la Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas, se realizaron, sin respetar el uso necesario, racional y proporcional de la fuerza pública, en el caso concreto, de la utilización del arma de fuego de cargo, que estaban obligados a observar, toda vez que atendiendo a la posición de la herida que presentó el quejoso y agraviado, así como al resto de las circunstancias que rodearon los hechos, no se acredita de legal el actuar de éstos elementos de la Policía Estatal Preventiva, en razón a que no se demostró riesgo, amenaza, agresión o peligro inminente para la integridad personal o la vida de los oficiales o de otras personas, puesto que no se configuró ningún supuesto, por el cual la reacción de los servidores públicos se encontrara justificada.

38. Al respecto de los hechos denunciados por **Q,** esposa del agraviado **A**, en relación a las lesiones con arma de fuego que le fueron causadas por elementos de Policía Estatal Preventiva, concretamente por el Agente **AR4**, expuso que, el 09 de marzo de 2019, a las 3:58 horas aproximadamente, le llamaron a su celular, que no alcanzó a contestar, por lo que llamaron posteriormente a su suegra **T1,** del Hospital General de Zacatecas, y le dijeron que su hijo, esposo de la quejosa, se encontraba internado en terapia intensiva, que acudieron y les informaron que estaba en cirugía, que al ir al segundo piso, fue cuestionada por 2 Elementos de la Policía Estatal Preventiva, quienes le dijeron que su esposo había disparado 3 veces en su contra atorándosele el arma y, por esa razón, ellos le habían disparado; narrando los hechos en torno a lo comentado por su esposo.

39. El **C. A,** al ratificar los hechos motivo de queja, refirió que el 09 de marzo de 2019, por la madrugada, conducía en Calera de Víctor Rosales, Zacatecas, un carro negro que le acababan de entregar, siendo acompañado por **T2**, y que después de salir de la lata buscando la salida, elementos de la Policía Estatal Preventiva les prendieron las luces, y al percatarse éste que en los asientos de atrás del vehículo traían unas armas forradas con periódico y un costal, se bajaron del vehículo y corrieron menos de una cuadra, cuando los elementos de la Policía Estatal le propinaron dos disparos de arma de fuego, cayendo al suelo sin poder levantarse, tirándose al piso también su compañero, acercándose a él, el oficial que le disparó a intentar golpearlo, pidiéndole que se levantara, a lo que le informo que no podía hacerlo porque no le respondía su pierna derecha, diciéndole a este elemento que lo había baleado, mostrándole las lesiones, que en ese momento el elemento comenzó a llorar diciéndole que por qué había corrido, acercándose otro Policía Estatal, pidiéndoles el lesionado que le hablaron a la ambulancia, y que no fue hasta que les informaron en claves lo que traían en el carro, cuando el oficial que le disparó se acercó con un arma que tomó del vehículo que el lesionado manejaba, y le pidió desesperado e insistiéndole que la tomara y, como no quería tocarla, no le permitía que los paramédicos de Calera de Víctor Rosales, lo atendieran. Observando que también a su compañero lo golpearon y le pusieron una chicharra en sus genitales.

40. **T1,** madre del agraviado **A,** expuso que el 9 de marzo 2019, a las 4 de la mañana, le habló la Trabajadora Social del Hospital General, y le dijo que acudiera inmediatamente, ya que su hijo estaba en terapia intensiva, que era urgente; que cuando acudió, vio a 3

14 Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Zacatecas, artículo 51 fracciones I y IX.

15 Íbid, artículo 53.

elementos de la Policía Estatal Preventiva, quienes le dijeron que su hijo había intentado dispararles y ellos le dispararon y lo trajeron a recibir atención médica; que, posteriormente, se enteró de que su hijo andaba con el "chino", **T2,** quien le comentó lo ocurrido, ya que su hijo no le contó nada, y lo que ella escuchó en ese momento, coincide con lo que le dijo el "chino", quien le comentó que los elementos de la Policía Estatal, les habían disparado y que el elemento que le había disparado a su hijo estaba llorando y obligando a **A** a que tocara un arma, que al "chino" lo golpearon y le colocaron una chicharra en sus genitales y ya no pudo ver como maltrataban a **A**, pero si vio cuando sacaron el arma del carro.

41. Se cuenta con la copia de la denuncia presentada por la **T1,** en fecha 13 de marzo de 2019, ante el Fiscal de Ministerio Público, adscrito al Módulo de Atención Temprana de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas, en contra de quien resulte responsable por los delitos de Tentativa de Homicidio y/o el que resulte, cometidos en perjuicio de **A**, en la que señaló que en el hospital, su hijo le comentó que andaba en Calera de Víctor Rosales, Zacatecas, con **T2**, en un carro, cuando los elementos de la Policía Estatal comenzaron a seguirlos, ellos se asustaron y salieron del carro echando a correr, disparándoles por la espalda la Policía Estatal, él cayó al suelo y estando tirado se acercó el policía Estatal al ver que le disparó le dijo que ya se había metido en un pedo y llorando le pedía que lo ayudara y que él le salvaba la vida llevándolo a curar, **A**, le respondió que hacía lo que quisiera pero que lo llevara al hospital y que vio cuándo otro policía del carro que traían los agraviados, sacaron unas armas que estaban enredadas y entonces éste policía desenredó las armas y de una cortó cartucho, se la puso en un lado diciéndole que la agarrara y que su hijo lo único que hizo fue agarrarla, señaló que le comentó que en ningún momento perdió el conocimiento.

42. De la hoja de atención pre-hospitalaria, suscrita por el **DR. A.C.9**, del Hospital Comunitario, de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas, se desprende que **A,** fue atendido por los **CC. A.C.1**, operador y TUM. **A.C.2**, personal de la Unidad de Protección Civil y Bomberos, a la 01:08 horas del 09 de marzo de 2019, en vía pública, en la calle […], por urgencia traumática, encontrando a **A**, de 24 años de edad, acostado en el piso de cúbito lateral izquierdo, consciente orientado, presentando lesiones por impactos de arma de fuego, herida en espalda, lumbares y en tórax derecho, que se clasifica como prioridad rojo, con posible sobrevivencia, realizando su traslado al hospital Comunitario.

43. Se recabaron también las copias del expediente clínico, del paciente **A**, respecto de la atención brindada en el Hospital General de Zacatecas, "Luz González Cosío", entre las que se encuentran la Hoja de Referencia con folio […], de **A,** de fecha 09 de marzo de 2019, suscrita por el **DR. A.C.9,** y **DR. A.C.11**, respectivamente, Director y Responsable de la Unidad del Hospital Comunitario de Calera, quienes lo refieren al Hospital General de Zacatecas, de la que se desprende que: "se le apreciaron 2 orificios de entrada, uno localizado en tórax en lado derecho, y un segundo en región lumbar. sin apreciar orificios de salida. Se refiere estable para valoración manejo en 2º. Nivel. Producidos por proyectil de arma de fuego".

44. La nota de ingreso de **A**, al Hospital General de Zacatecas "Luz González Cosío", de fecha 09 de marzo de 2019, elaborada por el médico **A.C.10.,** de la que se desprende que el paciente fue traído del municipio de Calera con heridas por proyectil de arma de fuego, desconociéndose como sucedieron los hechos por parte de los policías que apoyaron para trasladar al paciente a urgencias, que a la exploración física el paciente se encontraba obnubilado, sin seguir órdenes, encontrándolo con palidez de tegumentos, cuello cilíndrico sin adenomegalias, tórax con herida de proyectil a nivel del arco de la última costilla del lado derecho con salida en zona lumbar, abdomen sin datos de lesión, no datos de irritación peritoneal, extremidades integras. La Nota Postoperatoria, con folio número 000024, de cuyo Pronóstico Postoperatorio se desprende: HPPAF + lesión hepática grado IV de la AAST en segmentos IVa. VI y VII sin sangrado activo (S361) + lesión de colon transverso grado II, de la AAST (S365).

45. La Nota de Egreso de **A,** de fecha 14 de marzo de 2019, 11:00 horas, con folio número […], se asienta el Pronóstico su Ingreso: Abdomen por herida de arma de fuego abdominal + lesión hepática grado IV de la AAST en segmentos IVa. VI y VII + hemiperitoneo + lesión de

colon transverso grado II de la AAST. Diagnóstico de Egreso: HPPAF + Lesión hepática grado IV de la AAST en segmentos IVa. VI y VII sin sangrado activo + lesión de colon transverso grado II, de la AAST. De cuyo Resumen Clínico, se desprende: […] inicia con padecimiento el día de ayer tras sufrir impacto de arma de fuego en cuadrante superior izquierdo…pasa directo a quirófano para la realización de laparatomía exploradora, en la que se encuentra: Hemiperitoneo de 1000ml. Lesión hepática en segmentos VI y VII con diámetro aproximado de 10 cm con salida en segmento IVa con diámetro de 3 cm con sangrado activo por las mismas. Lesión de colon transverso a aprox. 7 cm del ángulo hepático con ruptura de aproximadamente 30 cm de su diámetro. Ingresa a recuperación […]. vuelve a pasar a quirófano el 11 de marzo de 2019 para desempaquetamiento hepático y aseo de cavidad.

46. Al respecto, **A.C.7,** Coordinador Municipal de Protección Civil y Bomberos de Calera de Víctor Rosales Zacatecas, informó que si se brindó atención pre hospitalaria a **A,** el cual, al ser revisado y valorado por personal de la ambulancia, (unidad médica 2863), lo encontró consciente, orientado, acostado en el piso en posición decúbito lateral Izquierdo, el cual presentaba una herida por proyectil de arma de fuego en espalda a la altura de las lumbares y tórax.

47. El **A.C.1,** Bombero de Protección Civil y Bomberos de Calera de Víctor Rosales, afirmó que cuando arribaron al lugar, y se encontraron un masculino en el piso, acostado en posición de decúbito lateral izquierdo, orientado, siendo revisado por **A.C.2.,** el cual presentaba una herida de proyectil de arma de fuego en espalda, a la altura de lumbares; que se le tomaron los signos vitales y se procedió a trasladarlo al hospital comunitario de Calera de Víctor Rosales, siendo recibido por el **DR. A.C.9**, señalando además que, cuando llegaron, observó que el Comandante **AR5**, de la Policía Estatal Preventiva, le decía algo al lesionado mientras estaba tirado en el piso y cuando lo subieron a la camilla, observó un objeto tirado a un costado en el piso, sin poder precisar si era un arma o no.

48. Igualmente, el **A.C.2,** Bombero de Protección Civil y Bomberos de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas, aseveró que, tardaron en subirlo a la ambulancia porque los elementos de la Policía Estatal Preventiva se acercaron y les pidieron que los esperaran, refiere que uno de ellos se acercó al lesionado y le insistía que tocara un arma, desconociendo de qué tipo, le decía que él la traía y que por eso tenía que tocarla para tomarle una foto, pero que el lesionado se negaba y retiraba la mano, y los oficiales le decían que si no la tocaba no lo llevarían a que lo atendieran, tardando cerca de diez minutos aun y cuando se le informó al Comandante de la Policía Estatal Preventiva, **AR5,** que el paciente requería la atención inmediata.

49. Al respecto, el Inspector General **AR2,** otrora Director de Policía Estatal Preventiva, negó los hechos citados por el quejoso, señalando que elementos a su cargo se encontraban de recorrido y vigilancia en el municipio de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas, quienes tuvieron a la vista un vehículo que circulaba con las luces apagadas, motivo por el que les marcaron el alto, haciendo este caso omiso, por lo que el conductor y su acompañante se echaron a correr, observando además que el conductor **A** traía en su poder un arma larga de fuego, el cual volteaba en reiteradas ocasiones, apuntaba, cargaba y trataba de accionar el arma, advirtiéndosele en varias ocasiones que bajara el arma, por lo que al encontrarse el elemento ante una amenaza real, actual e inminente de su integridad, así como de más personas accionó su arma de cargo en cumplimiento de su deber; adjuntando a su informe copia del oficio de puesta a disposición de los detenidos.

50. Por su parte, el oficial **AR3,** declaró que tuvieron a la vista un vehículo que circulaba con las luces apagadas, por lo que les marcó el alto con las torretas prendidas, tocando el auto parlante e identificándose como policías, que trataron de acelerar la marcha del vehículo y se detuvieron de forma repentina, descendiendo del mismo, dos personas, que el copiloto corrió hacia la calle […] y el conductor llevaba en la mano derecha un arma larga, por lo que él y el Comandante **AR5,** trataron de darle alcance al conductor, pie a tierra, el cual más adelante alzó el arma y les apuntó intentando dispararles, viendo que al cargar el arma se le salió un cartucho y al intentar accionarla nuevamente, refiere el oficial **AR3,** que en ese momento

observó el peligro y sacó su arma y le disparó en el estómago del lado derecho, cayendo el conductor al piso herido, que se acercaron él y el Comandante **AR5**, pidieron apoyo de inmediato y llegó la ambulancia, llegando también sus compañeros con la otra persona detenida, comentándole posteriormente sus compañeros que habían encontrado un arma larga en el asiento del copiloto, en el vehículo de los detenidos.

51. Asimismo, el oficial **AR5**, argumentó que circulaba un vehículo con luces apagadas y al marcarle el alto, se paró de forma repentina, del cual bajaron dos personas que se dirigieron en distintas direcciones, que sus compañeros **AR6** y **AR4,** se fueron a perseguir al copiloto, mientras que él y **AR3,** fueron en persecución del conductor, y le pidieron que se detuviera sobre la calle […]; "que en una sola ocasión se detuvo, pero sólo para apuntarles con su arma, sino, como no funcionó, lo hizo nuevamente cayendo el cartucho de su arma al suelo y nuevamente no funcionó, pero como su compañero se sintió amenazado, lo motivó a utilizar su arma corta de cargo contra esta persona, solicitando de forma inmediata una ambulancia para que lo atendieran y el apoyo para que fuera escoltada la ambulancia hasta el Hospital General de Zacatecas, que posteriormente, en la revisión del vehículo de los detenidos realizada por uno de sus compañeros, se encontró un arma larga del lado del acompañante.

52. Por su parte, los oficiales **AR6** y **AR4,** refirieron que hicieron la parada al vehículo tsuru color negro, prendiendo los códigos y el alto parlante, pero estos hicieron caso omiso, que más adelante se detuvo el vehículo completamente, bajando dos personas, refirió el agente **AR6,** que el conductor del vehículo cargaba en sus manos un arma larga, que él y **AR4,** se fueron a perseguir al copiloto, regresando con él detenido, a donde estaba el vehículo al que le realizaron la inspección, encontrando un arma larga R15 en su interior, esperando a que llegaran sus compañeros **AR3** y **AR5**, quienes traían al detenido de pie, caminando, sin apreciar en qué condiciones lo traían; señalando por su parte **AR4,** que desconoce las circunstancias en que fue detenida la otra persona porque fue en otra calle.

53. La carpeta de Investigación número […], formada por la querella que presentó la **C. T1**, en contra de los **ELEMENTOS DE LA POLICÍA ESTATAL PREVENTIVA** que lo detuvieron, por los Delitos cometidos en perjuicio de su hijo **A,** que ya fue señalada con anterioridad; se encuentra integrada entre otras constancias, por su relevancia:

- La copia del certificado Médico de Lesiones, practicado **A,** por la **MTE. EN CIENCIAS FORENSES** y **CRIMINOLOGÍA A.C.12,** Perito Médico Legista, del Departamento de Medicina Legal, de la Fiscalía General de Justicia del Estado, del 09 de marzo de 2019.
- La copia del Expediente Clínico de **A**, respecto de la atención brindada en el Hospital General de Zacatecas.
- El informe de investigación, que rindió al **LIC. A.C.5,** Agente del Ministerio Público número 4, de la Unidad Especializada en Investigación Mixta, de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas, por el Inspector Jefe **A.C.13,** el 27 de marzo de 2019, en el que señaló que realizaron la inspección en el lugar de los hechos en calle […], y procedieron a localizar a probables testigos presenciales de los hechos, obteniendo resultados negativos, ya que los entrevistados manifestaron no haber presenciado los hechos, adjuntando copia del acta de inspección del lugar de los hechos.

54. La carpeta de investigación número […], se integró con motivo de la denuncia realizada por el **AR3**, elemento de la Policía Estatal Preventiva, ante el **LICENCIADO A.C.5**, Agente del Ministerio Publico numero 4, Especializado en Investigación Mixta de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas, en fecha 09 de marzo de 2019, en contra de **A,** en la que expuso que al denunciado se le marcó el alto y se le prendieron los códigos, porque circulaba en un vehículo sin luces, haciendo caso omiso, deteniéndose de repente más adelante el vehículo, descendiendo dos personas, llevando el denunciado un arma larga, al cual se le indicó la soltara, pero éste se paró, volteó, le apuntó y jaló el gatillo sin accionar o disparar su arma, cortó cartucho, el cual salió de la recamara, cayendo al piso y volvió a accionar jalando el gatillo solo que no realizó la detonación, por lo que el agente policial le apuntó y le disparó con su arma corta, pegándole en un costado del abdomen, cayendo al suelo y quedando a un lado del denunciado el arma, por lo que se solicitó el apoyo de una ambulancia.

55. Así, de las siguientes constancias: las Actas de Inspección de Personas, de **T2** y **A,** levantadas respectivamente por los elementos de la Policía Estatal Preventiva **AR6** y **AR3**, de fecha 09 de marzo de 2019, en la que se asienta que al primero de los citados no se le encontró ningún objeto ilícito y el segundo portaba un arma de fuego en la mano derecha, la cual fue asegurada por el personal del Instituto de Ciencias Forenses de Zacatecas

56. La declaración del Comandante **AR5,** quien refirió que iba atrás de **AR3**, el cual le gritaba al denunciado que se parara, que era Policía Estatal, que la persona llevaba un arma, se detuvo, volteó y le apuntó a su compañero, accionando el disparador pero no salió el proyectil, que cortó y en ese momento cayó el cartucho sin repercutir al suelo y no disparó, momento en que su compañero le apuntó con el arma de cargo corta y le disparó, cayendo la persona al suelo, y que al acercarse **AR3** y él, vieron que le dio el disparo a un costado del abdomen, pidiendo apoyo al C-4 vía radio para apoyo de ambulancia. Asimismo, las declaraciones de **AR6** y **AR4,** quienes manifestaron que como las personas corrieron por lados diferentes, ellos se concretaron a darle alcance y detener al copiloto **T2**.

57. La copia del Certificado Médico de Lesiones, practicado a **T2**, por la **C. DOCTORA A.C.15,** Perito Médico Legista, del Departamento de Medicina Legal, a las 5:18 horas de 09 de marzo de 2019, del que se desprende que presentó lesiones cara posterior de los tres tercios de cuello, en región infraescapular y lumbar derecha, en muñeca derecha y rodilla izquierda, con una evolución menor a 24 horas.

58. La copia del Certificado Médico de Lesiones, practicado **A,** por la **MTE. EN CIENCIAS FORENSES Y CRIMINOLOGÍA A.C.12,** Perito Médico Legista, del Departamento de Medicina Legal, de la Fiscalía General de Justicia del Estado, a las 13:00 del 09 de marzo de 2019, en la que asienta haber sido informada en el Hospital General de Zacatecas, que el paciente se encuentra en cirugía, proporcionándole personal de enfermería en el área de quirófanos el diagnóstico Postoperatorio de: “Abdomen agudo, lesión hepática grave IV de la AAST en segmento IXa, VI y VII (5361) + Hemoperitoneo (R661) + lesión de colon transverso grado II de la AAST (T5365)”, clasificando las lesiones, como de aquellas que no ponen en peligro la vida, tardan más de 15 días en sanar, reservándose las consecuencias médico legales.

59. Así como el Dictamen identificativo y de funcionalidad realizado por el **LICENCIADO EN CRIMINOLOGÍA A.C.16**, de fecha 09 de marzo de 2019, respecto al estudio pericial de balística de los indicios encontrados en la Calle […] de […], Zacatecas, en el que concluyó: **PRIMERA: EL ARMA DE FUEGO** ROTULADA E IDENTIFICADA COMO **“I-2 (2.2)”, CORRESPONDE A UN FUSIL DE ASALTO, CALIBRE POR DESIGNACIÓN DOSCIENTOS VEINTITRÉS REMINGTON (.223REM), SIN MARCA, MODELO NI NUMERO DE SERIE, LA CUAL SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO DE FUNCIONALIDAD. SEGUNDA: LOS NUEVE CARTUCHOS PARA ARMA DE FUEGO** ROTULADOS E IDENTIFICADOS COMO **“I-2.1”, “I-2(2.3)”,”I-4” “I-5(5.3)” E “I-5.1” CORRESPONDEN AL CALIBRE POR DESIGNACION DOSCIENTOS VEINTITRÉS REMINGTON (.223 REM). TERCERA: EL CASQUILLO** ROTULADO COMO **“I-3”, CORRESPONDE AL CALIBRE POR DESIGNACIÓN NUEVE MILIMETROS LUGER (9MM). CUARTA: EL ARMA DE FUEGO** ROTULADA E IDENTIFICADA COMO **“I-5(5.2)”, CORRESPONDE A UN FUSIL DE ASALTO, CALIBRE POR DESIGNACION DOSCIENTOS VEINTITRES REMINGTON (.223 REM), SIN MARCA, MODELO NI NUMERO DE SERIE, LA CUAL SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO DE FUNCIONALIDAD.**

60. El Dictamen Pericial de Campo, emitido por el Perito en Criminalística de Campo, **LCC. A.C.17**, el 09 de marzo de 2019, realizado en el lugar de los hechos, en el que concluyó: **PRIMERA: LA CALLE […] DE […], ZAC.** Corresponde al **LUGAR DE LOS HECHOS. SEGUNDA:** SE LOCALIZO EN EL COSTADO IZQUIERDO DEL ASIENTO DEL COPILOTO DEL VEHÍCULO […] **UN ARMA LARGA EN COLOR NEGRO SIN LEYENDAS VISIBLES; UN CARTUCHO ENCONTRADO EN LA RECAMARA DEL ARMA; UN CARGADOR METÁLICO EN COLOR NEGRO CON CARTUCHOS EN SU INTERIOR. TERCERA**: SE LOCALIZADO EN LA CALLE […] DE […] ZAC. **UN CASQUILLO CON LA LEYENDA […].**

CUARTA: ES LOCALIZADO SOBRE LA BANQUETA ESTE DE LA CALLE […] DE CALERA DE VÍCTOR ROSALES, ZAC. **UN CARTUCHO SIN LEYENDA VISIBLE, UN ARMA LARGA EN COLOR NEGRO SIN LEYENDAS VISIBLES; UN CARTUCHO ENCONTRADO EN LA RECAMARA DEL ARMA; UN CARGADOR METÁLICO EN COLOR GRIS CON CARTUCHOS EN SU INTERIOR, UNA MANCHA EN COLOR ROJIZO CON CARACTERÍSTICAS SIMILARES A LAS DE LIQUIDO HEMÁTICO EL CUAL PRESENTA UN MECANISMO DE PRODUCCIÓN DE GOTEO ESTÁTICO**…"

61. También el Acta de aviso de hechos que realizó el Agente **A.C.18**, Policía Primero de Investigación con número […], adscrito a la Unidad Mixta de Investigación del Distrito Judicial de Calera, de Víctor Rosales, Zacatecas, quien acudió al lugar de los hechos en atención a un reporte del 911, y tuvo a la vista el vehículo en el que viajaban los detenidos, cuyas características describe, señalando que se localizó un arma tipo fusil calibre .223, sin número de matrícula ni marca, custodiada por elementos de Seguridad Pública de ese municipio, los que le proporcionaron información de que el vehículo era tripulado por **A**, quien se encontraba lesionado por proyectil de arma de fuego en la calle […], con una lesión en el abdomen del lado derecho y custodiado por elementos de Policía Estatal Preventiva, siendo lesionado por un elemento de la Policía Estatal Preventiva, ya que cuando le marcaron el alto descendió del vehículo con un arma tipo fusil calibre .223 en sus manos, dando vuelta en la calle […], que fue perseguido dándole comandos verbales de que se detuviera, haciendo caso omiso, y que cuando voltea y cerroja el arma para dispararle al elemento de Policía Estatal, éste le realizó un disparo hiriéndolo el cual cayó con el arma que quedó a unos centímetros de su cuerpo, se apreció un cartucho útil calibre .223, aproximadamente de ocho metros de distancia se encontraba un casquillo percutido calibre 9 mm, al lesionado se le brindó protección médica para ser trasladado al hospital comunitario de esta ciudad. Su acompañante **T2**, fue asegurado unos metros más adelante por elementos de Policía Estatal y mismo que portaba el arma tipo fusil calibre .223 sin marca ni matrículas visibles, en el momento se solicitó al INZACIF para solicitar a peritos para el procesamiento de la escena, levantamiento y embalaje de armas, agregando los detenidos, armas y casquillos percutidos calibre 9mm, cartucho útil calibre .223 y vehículo, fueron puestos a disposición de esa a su digno cargo por elementos de Policía Estatal Preventiva.

62. El Informe vertido por el **LICENCIADO EN CRIMINOLOGÍA A.C.16,** Examinador del Laboratorio de Balística Forense, del 15 de marzo de 2019, en el que señaló que el cartucho para arma de fuego rotulado como "I-5.1", presenta en su base, el arma de fuego percutió el cartucho, sin embargo, por motivos que técnicamente no se establecen, este no produjo la ignición, deflagración y proyección de la bala que aloja, de manera particular, no se generó el disparo. Que, al no haberse producido el disparo, no hay marcas individuales impresas en el cartucho, que permitan establecer un estudio micro comparativo…"

63. El informe de investigación realizado por los **CC. COMANDANTE A.C.13** y el agente **A.C.14**, de la Policía Ministerial de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, de fecha 19 de marzo de 2019, del que se desprendió que al ser revisada por el oficial que controla el Sistema de Emergencias 911, la cámara ubicada en la esquina con la calle […], donde se encuentra el establecimiento conocido como la lata de cerveza, de las 00.00 horas hasta las 01 30 horas del 09 de marzo de 2019, no se detectó nada anormal, observando a las 00:45 horas un vehículo de la marca Tsuru color gris o negro, circulando de manera normal sobre la calle […] con dirección a Fresnillo, sin detenerse y a las 01:15 horas, ingresaron por esa calle dos patrullas que identificaron por las luces de las torretas, desconociendo la corporación a la que pertenecían. Y que el vehículo con placas de circulación […] y número de serie […], corresponden al vehículo arriba mencionado, el cual fue robado del interior del corralón de Grúas Arellano y cuenta con reporte de robo, realizado por el encargado **C1,** en fecha 03 de marzo del 2019.

64. El Dictamen Identificativo y de Funcionalidad y Micro Comparativo, emitido por el **LICENCIADO EN CRIMINOLOGÍA A.C.16** Examinador del Laboratorio de Balística Forense, del 28 de mayo de 2019, en el que se concluyó: **PRIMERA:** EL ARMA DE FUEGO ROTULADA COMO "INDICIO 01", CORRESPONDE A LA PISTOLA, SEMIAUTOMÁTICA, CALIBRE POR DESIGNACIÓN NUEVE POR DIECINUEVE MILÍMETROS (9X19MM), DE LA

MARCA DEL FABRICANTE BERETTA, MODELO PX4 STORM, CON NUMERO DE SERIE PX158285, LA CUAL SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO DE FUNCIONALIDAD. **SEGUNDA:** AL REALIZAR EL ESTUDIO MICRO COMPARATIVO ENTRE EL CASQUILLO "PROBLEMA" ROTULADO COMO "I-3",Y LOS CASQUILLOS "TESTIGO", SE DETERMINA QUE TODOS ELLOS FUERON PERCUTIDOS POR EL ARMA DE FUEGO ROTULADA COMO "INDICIO 01" UNA PISTOLA, SEMIAUTOMÁTICA, CALIBRE POR DESIGNACIÓN NUEVE POR DIECINUEVE MILÍMETROS (9X19MM), DE LA MARCA DEL FABRICANTE BERETTA MODELO […], CON NUMERO DE SERIE […].

65. Copia electrónica del Expediente Clínico con motivo de la atención de **A,** en el Hospital General de Zacatecas, del que se desprenden las notas citadas en el numeral 14.3.

66. La clasificación de lesiones de **A,** realizado a las 11:00 horas del 29 de octubre de 2019, por el **DR. A.C.19,** Perito Médico Legista de la Dirección General de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado, de fecha 01 de noviembre de 2019, con relación al expediente médico del **C. A** del cual se toma para tal efecto, la NOTA DE INGRESO, de fecha 9 de marzo de 2019, elaborada por el Dr. […], en su parte que dice: *"…tórax con herida de proyectil a nivel de arco de la última costilla del lado derecho con salida en zona lumbar"*. Así como la NOTA POSTOPERATORIA, realizada el 9 de marzo de 2019 por el Dr. […], en la parte que señala: *… "Diagnóstico postoperatorio: HPPAF + abdomen agudo (R100) + lesión hepática grado IV de la AAST en segmentos IVA, VI V11 (S361) + hemoperitoneo (K661) + lesión de colon transverso grado II de la AAST (S365)"*. Concluyendo que: **1. SON LESIONES QUE SI PONEN EN PELIGRO LA VIDA; 2. TARDAN MÁS DE 15 DÍAS EN SANAR;** y, **3. Y SE RESERVAN LAS CONSECUENCIAS MÉDICO-LEGALES.**

67. Por último, el Dictamen Médico de Mecánica de Lesiones del **C. A,** emitido por el **DR. A.C.19,** Perito Médico Legista de la Dirección General de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado, dentro de la Carpeta número […], de fecha 13 de noviembre de 2019, para determinar de qué manera pudieran haber sido inferido las lesiones que presentó el **C. A**, describiendo la posición víctima-victimario, conforme a las lesiones que presentó, descritas en el expediente clínico electrónico o alguna otra conclusión médica que pudiera ser relevante en el esclarecimiento que trajo como consecuencia de las heridas con las que cuenta **A** a consecuencia de los disparos de arma de fuego, mencionando si por el tipo de lesiones pudieron haber sido por accidente, descuido, o bien intencional. El citado Perito, con base en el análisis del diagnóstico de las notas médicas de ingreso, preoperatoria y postoperatoria y las actuaciones de la carpeta de investigación, que señalan la lesión en tórax con salida en zona lumbar, presentada por **A**, observó que tal herida se encuentra clasificada dentro del grupo de las heridas producidas por proyectil simple, por contar con un orificio de entrada, un trayecto y un orificio de salida. El orificio de entrada se encuentra ubicado en la superficie anterior del cuerpo, concretamente en el último arco costal derecho, sobre la línea medio clavicular, y cuyo orificio de salida se encuentra ubicado en la región lumbar, orientándolo hacia una herida producida con una dirección de adelante hacia atrás en el plano anatómico, describiéndose en la nota postoperatoria el daño que el proyectil produjo en su trayecto, llegando a las siguientes **CONCLUSIONES: PRIMERA:** SE PUEDE DETERMINAR QUE, DE ACUERDO AL EXPEDIENTE CLÍNICO PROPORCIONADO, LA POSICIÓN VÍCTIMA VICTIMARIO PROBABLE PARA LA LESIÓN DESCRITA, FUE ESTANDO AMBOS EN BIPEDESTACIÓN, CON EL VICTIMARIO POSICIONADO DE FRENTE A LA VÍCTIMA; SIN SER POSIBLE DETERMINAR DISTANCIA NI ANGULACIÓN. **SEGUNDA:** NO ES POSIBLE DETERMINAR SI LA LESIÓN FUE PRODUCIDA POR ACCIDENTE, DESCUIDO O DE MANERA INTENCIONAL, DEBIDO A QUE EL PRESENTE DICTAMEN ES BASADO EN EL MÉTODO ANALÍTICO Y DEDUCTIVO, POR LO CUAL NO ES PERMISIBLE HACER DETERMINACIONES SUBJETIVAS.

68. Obran también, las constancias de la carpeta única de investigación marcada con el número […], que se integra ante la **LIC. A.C.6**, Fiscal del Ministerio Público de la Unidad Especializada en la Investigación del Delito de Tortura con competencia Estatal, en contra de **ELEMENTOS DE LA POLICÍA ESTATAL PREVENTIVA**, cometido en perjuicio de **T2**, dentro de la cual se encuentran, entre otras constancias descritas, el Informe de

Investigación rendido por el Inspector Jefe **A.C.20** , y Policía Primero **A.C.21**, Policías de Investigación, Adscritos a la Unidad de delitos de Tortura, de fecha 07 de agosto de 2019, en cuya investigación, señalan, que se constituyeron Centro de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas, entrevistándose con el C. **A,** interno en dicho centro, con quien se identificaron y le informaron el motivo de su presencia, quien accedió voluntariamente a que se le practicara el Acta de Inspección de su persona, informándoles que en la actualidad solo cuenta con la cicatriz de la cirugía que le realizaron en el área de Mesogastrio e Hipogastrio (estomago) para poder extraer el proyectil de arma de fuego, así mismo cuenta con la cicatriz de 2 orificios donde penetraron los impactos de arma de fuego hechos por los aprehensores, agregando que a raíz de dichos impactos, quedó sensible su pierna derecha, ya que siente que le hormiguea.

69. Así como el Acta de inspección de persona de **A**, persona privada de libertad, practicada por el Inspector Jefe **A.C.20,** Policía de Investigación, en fecha 06 de junio de 2019, en la que se asienta haber tenido a la vista a **A,** (DESCRIBE SU VESTIMENTA, ALTURA Y PESO) INFORMÁNDOLES QUE CUENTA CON UNA CICATRIZ DE LA CIRUGÍA QUE SE LE REALIZÓ EN EL ÁREA DEL MESOGASTRIO E HIPOGASTRIO (ESTOMAGO) DE 15 CM, ASÍ MISMO CUENTA CON DOS CICATRICES DONDE PENETRARON DOS IMPACTOS DE PROYECTIL DE ARMA DE FUEGO, EN EL ÁREA FLANCO DE SU CUERPO; DE IGUAL MANERA EN REGIÓN ZARCA, CUENTA CON CICATRIZ DONDE INGRESA PROYECTIL DE ARMA DE FUEGO; ASIMISMO NOS INFORMA QUE A RAÍZ DE ESTE ULTIMO IMPACTO SIENTE SU PIERNA DERECHA COMO QUE LE HORMIGUEA (QUEDO SENSIBLE). EN SU PIERNA DERECHA A UN COSTADO DE CARA ANTERIOR DE LA PIERNA EXTERNA, CUENTA CON UN TATUAJE EN FORMA DE NUBE.

70. Finalmente, la Clasificación Médica de Lesiones del **C. A,** practicada a las 19:00 horas el 28 de mayo de 2019, realizada por la **DRA. NORMA ALICIA GUARDADO MARTÍNEZ**, Perito Médico Legista de la Dirección General de Servicios Periciales, que se recibió en la Agencia del Ministerio Público, el 16 de agosto de 2019, con base en la Nota de Ingreso, así como la nota de Egreso de fecha 14 de marzo de 2019, elaborada por la **DRA. NÉLIDA GUADALUPE VEGA MUÑOZ**, quien llega a las siguientes **CONCLUSIONES:** PRIMERA: SON LESIONES QUE SI PONEN EN PELIGRO LA VIDA. SEGUNDA: TARDAN MAS DE QUINCE DIAS EN SANAR. TERCERA. SE RESERVAN LAS CONSECUENCIAS MÉDICO LEGALES.

71. Los medios de prueba anteriormente citados, resultan suficientes para comprobar la indebida actuación del oficial **AR3,** elemento de la Policía Estatal Preventiva, al hacer uso excesivo e innecesario del arma de fuego de cargo que portaba, en contra de **A,** a quien le ocasionó graves daños, que no sólo pusieron en riesgo su integridad física, sino también su vida, vulnerando consecuentemente con ello, su derecho a la integridad y seguridad personal en relación al derecho a la integridad física. Lo anterior, es así, en atención a las siguientes consideraciones y fundamentos:

72. Ahora bien, el Inspector General **AR2,** otrora Director de Policía Estatal Preventiva, argumentó que, el agente de esa corporación **AR3** accionó su arma de cargo en cumplimiento de un deber y ante una amenaza real, actual e inminente a su integridad y de las demás personas, en contra del agraviado **A,** ocasionándole las lesiones que presentó**,** en razón a que éste, luego de descender del vehículo que conducía con las luces apagadas, emprendió la fuga corriendo, con un arma de fuego en la mano derecha, la cual en varias ocasiones cargó y le apuntó, tratando de accionar el arma hacia su persona, haciendo caso omiso a las indicaciones que le daban.

73. Argumento sustentado en lo depuesto por el elemento de la Policía Estatal Preventiva, **AR3** y el Comandante de la citada corporación **AR5,** quienes así lo afirmaron, tanto en su denuncia y declaración rendida ante el Ministerio Público, como en sus comparecencias ante este Organismo, señalando en síntesis, que dos personas descendieron del vehículo y corrieron en distintas direcciones, llevando el conductor **A** (ahora agraviado) un arma en la mano derecha, con la cual le apuntó al oficial **AR3,** quien iba adelante, y que el ahora agraviado intentó accionarla en dos ocasiones, pero que no funcionó, por lo que este oficial

al verse amenazado, le disparó, pegándole en el estómago. Versión esta última, que parcialmente se ve respalda con lo declarado por el agente **AR6,** quien refiere haber observado que el conductor del vehículo **A** cargaba en sus manos un arma larga.

74. Por su parte, ante este Organismo, el agraviado **A,** sin evadir la responsabilidad que le pudiere corresponder en estos hechos, reconoce que después de salir de la lata buscando la salida, en el municipio de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas, como a seis cuadras aproximadamente, fueron seguidos por los elementos de la Policía Estatal Preventiva, quienes les prendieron las luces, por lo que él detuvo la marcha del vehículo color negro marca Tsuru que conducía, en compañía de su primo **T2**, descendieron y echaron a correr, porque refiere **A,** que en el asiento de atrás del vehículo que conducía, observaron unas armas envueltas con periódico y cinta, así como un costal.

75. No obstante lo anterior, **A**, no acepta el argumento expuesto por los elementos de la Policía Estatal Preventiva, respecto de que al correr llevara en su mano derecha un arma con la que apuntó e intentó dispararle al oficial de la Policía Estatal Preventiva **AR3,** como éstos aseveran. Porque contrario a ello, lisa y llanamente, manifestó que su acompañante y él corrieron y que fueron los policías quienes les dispararon en 2 ocasiones, cayendo al suelo herido, cuando no había corrido ni media cuadra, tirándose al piso también su compañero **T2**, a quien observó que golpearon.

76. Versión que, se ve avalada con los testimonios que, ante este Organismo, otorgaron las personas que auxiliaron médicamente y tuvieron contacto directo con el lesionado, como lo fueron personal de Protección Civil, pues al respecto, el **C. A.C.7,** Coordinador Municipal de Protección Civil y Bomberos de Calera de Víctor Rosales Zacatecas, informó que el agraviado presentaba en la espalda a la altura de los lumbares y tórax, herida producida por proyectil de arma de fuego.

77. Mientras que por su parte los **CC. A.C.1.** y **A-C-2,** Bomberos de Protección Civil, de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas, quienes atendieron el reporte arribando al lugar de los hechos, expusieron que encontraron a un masculino en el piso, acostado en posición de decúbito lateral izquierdo, presentando una herida de proyectil de arma de fuego en espalda, a la altura de lumbares, siendo revisado por el segundo de los mencionados.

78. Aunado a lo señalado en la hoja de atención pre-hospitalaria y la nota de referencia, suscritas por el **DR. A.C.9**, del Hospital Comunitario, de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas, quien lo refiere a otro hospital de 2º. Nivel, en la que se asienta las lesiones encontradas por los **CC. A.C.1 y A.C.2**, personal de la Unidad de Protección Civil y Bomberos en la persona de **A,** asentando este médico también, que el paciente manifiesta haber sufrido dos impactos de bala, al cual le apreció 2 orificios de entrada, uno localizado en lado derecho de tórax, y un segundo en región lumbar, sin apreciarle orificios de salida.

79. Desprendiéndose también de las constancias médicas, del expediente clínico impreso recabado por esta Institución, respecto de la atención otorgada a **A,** por el personal de médico del Hospital General “Luz González Cosío” de Zacatecas, en el área de urgencias, que dicho paciente sufrió heridas por proyectil de arma de fuego, específicamente en la nota de ingreso con folio 000005, donde se asienta, que presentó en tórax, herida de proyectil a nivel del arco de la última costilla del lado derecho con salida en zona lumbar. Asentándose en la nota Postoperatoria como pronóstico postoperatorio: HAPPAF + Lesión hepática grado IV de la AAST en segmentos IVa, VI y VII, sin sangrado activo (S361) + Lesión de colon transverso grado II de la AAST (S365). Y en la nota de egreso con folio 000032, como pronóstico de ingreso: Abdomen agudo por herida de arma de fuego abdominal + lesión hepática grado IV de la AAST en segmentos IVa, VI y VII, + Hemiperitoneo + Lesión de colon transverso grado II de la AAST. Y, Pronostico de Egreso: HAPPAF + Lesión hepática grado IV de la AAST en segmentos IVa, sin sangrado activo + Lesión de colon transverso grado II de la AAST., tras sufrir impacto de arma de fuego en cuadrante superior izquierdo.

80. En adición, a la entrevista realizada por el Inspector Jefe **A.C.20,** Elemento de la Policía de Investigación, con **A,** persona privada de libertad, en el Centro Regional de Reinserción

Social Varonil de Cieneguillas, en fecha 06 de junio de 2019, con motivo de la integración de la carpeta número […]**,** quien al inspeccionar la persona de **A**, éste le informó que cuenta con una cicatriz de la cirugía que se le realizó en el área del mesogastrio e hipogastrio (estomago) de 15 cm., observando el Inspector Jefe, que esta persona cuenta con dos cicatrices donde penetraron dos impactos de proyectil de arma de fuego, en el área flanco de su cuerpo y de igual manera en región zarca, le apreció otra cicatriz donde ingresa proyectil de arma de fuego; y que este agraviado le informó, que a raíz de este último impacto siente su pierna derecha como que le hormiguea (quedó sensible).

81. Aún y cuando esas evidencias no diriman con claridad, si fue 1 o 2 los disparos que realizaron los elementos de la Policía Estatal Preventiva y si sólo fue 1 o fueron 2 los proyectiles que se impactaron en el cuerpo de **A**, causándole las heridas y consecuentemente el daño en su integridad física, y si dicho disparo o disparos se realizaron por la espalda o estando el victimario de frente a su víctima, no dejan de ser medios indiciarios de la probable posibilidad, de que pudieron ser más de uno.

82. Por lo que si bien, las certificaciones y clasificaciones médicas y el dictamen de mecánica de lesiones, que obran en la carpeta de investigación […], ya reseñadas con antelación, y que se realizaron tomando en consideración evidentemente, la información obtenida por el personal médico de enfermería y la consignada también en el expediente clínico electrónico respecto de la atención médica de urgencia que se brindó a **A**, por la lesión de gravedad que requirió de cirugía por el personal médico del Hospital General de Zacatecas, (el cual es similar en su contenido al expediente impreso) por las cuales se estimó, que la herida de proyectil de arma de fuego que presentó el citado agraviado, en tórax a nivel del arco de la última costilla del lado derecho con salida en zona lumbar, ocasionando su trayectoria el daño que se describe en la nota postoperatoria, corresponde a una herida de proyectil simple por contar con un orificio de entrada, un trayecto y un orificio de salida; concluyéndose así, que la probable lesión se realizó estando ambos de pie, el victimario posicionado de frente a la víctima, sin ser posible determinar su distancia ni angulación.

83. Dicho de otra manera, se estimó que fue un proyectil de arma de fuego el que penetró por la parte (anterior) del pecho o dorso y en su recorrido hacia su salida ocasionó la afectación abdominal dañando el área hepática y el colon, para salir el proyectil por región dorsal o trasera (posterior), considerando por tanto, que el disparo se hizo estando ambas personas (policía y víctima) de pie y de frente una a la otra, desconociéndose el trecho existente entre ambos y el lugar en que se encontraba de cada uno al momento del disparo.

84. Conclusión que desde luego, sin estar a discusión, por provenir de personas especializadas, con conocimientos y experiencia basta, versados en la materia forense de medicina, independientemente de que hubieren sido uno o dos los disparos que se hicieron, realizándose de frente o por la espalda al agraviado, revela una verdad formal, que es suficiente para demostrar que **A,** sufrió un daño grave en su integridad corporal, ocasionado por el proyectil disparado por el arma de fuego que realizó el elemento policial **AR3,** cuando éste accionó su arma en su contra.

85. Pero no así para tener por comprobada fehaciente y contundentemente la versión oficial de la autoridad, o de esos servidores públicos, es decir, no así para determinar, que el oficial **AR3,** hizo un sólo disparo, que lo realizó ante un inminente peligro de amenaza para su integridad corporal y mucho menos, para considerar que **A**, cuando corrió traía en sus manos un arma de fuego y la haya apuntado en repetidas ocasiones a los oficiales y sobre todo a **AR3,** para justificar por ende, la actuación de dichos servidores públicos.

86. Sino que la citada conclusión, únicamente clarifica la posición que tenía el oficial **AR3** respecto a **A,** cuando aquél disparó el proyectil que le produjo a este último una grave lesión en su integridad corporal, y que lo fue estando ambos de pie y de frente, sin haber sido posible precisar la distancia entre uno y otro, ni el ángulo de donde se hizo el disparo.

87. La cual no riñe ni con lo expuesto por los oficiales AR3 y **AR5,** quienes manifestaron que, al perseguir a **A,** éste voltea o se para y se voltea y es cuando el oficial le dispara al agraviado, ni desvirtúa la versión de **A,** quién sin detallar ninguna circunstancia, solo se concretó a manifestar que corrieron su acompañante y él, y no llevaba ni una cuadra cuando le propinaron dos balazos, cayendo herido al piso. Porque el hecho de haber señalado el agraviado que le propinaron dos balazos, no significa forzosamente, que los mismos tuvieran que impactarse en su cuerpo.

88. Señalaron los Elementos de la Policía Estatal Preventiva, que **A** y **T2,** corrieron por diferentes partes, por lo que dos agentes siguieron a uno y los otros dos al otro; mientras que **A** afirma que corrieron y que cuando el cayó herido al piso se dejó caer también T2**,** a quien golpearon y le pusieron una chicharra, (circunstancia que hace presumir fundadamente que corrieron en la misma dirección)

89. Al respecto se cuenta como indicio de su afirmación, copia del Certificado Médico de Lesiones, practicado a **T2**, por la **C. DOCTORA A.C.15,** Perito Médico Legista, del Departamento de Medicina Legal, a las 5:18 horas de 09 de marzo de 2019, en el que se certifican las lesiones que presentó **T2**, con una evolución menor a veinticuatro horas de producción. Aunado a lo señalado por la **C. T1,** madre del agraviado.

90. Asimismo, aseveró el agraviado que el oficial que le disparó **AR3,** se acercó con un arma que tomó del vehículo que conducía el agraviado, y le insistía que la tomara y como no quería tocarla, le dijo que si quería que lo atendieran los paramédicos, primero tenía que tocar el arma, sin que los paramédicos de Calera de Víctor Rosales, lo atendieran por órdenes de los oficiales, que lo agarró con fuerza, se subió a su cuerpo y le extendió los brazos, hasta que extendió sus manos, queriéndolo obligar a que empuñara el arma, y como se negaba se enojó y lo soltó, permitiendo hasta ese momento que se le acercaran los paramédicos, lo cual fue presenciado por estos paramédicos.

91. Que guarda relación con lo expuesto por los referidos Elementos de Protección Civil y Bomberos de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas, **CC. A.C.1 y A.C.2**, en el sentido de que los elementos de la Policía Estatal Preventiva, los hicieron esperar aproximadamente diez minutos a pesar de ser informados que la persona requería de atención médica urgente, ya que un policía se acercó con un arma al lesionado y le insistía para que la tocara y tomarle una foto, a lo cual, el lesionado se negaba, retirando su mano, y el oficial le decía que si no lo hacía, no lo iban a llevar a atender, e intentaban estos policías sacarle información mostrándole fotografías,

92. Aunado además a que del informe de investigación realizado por los **COMANDANTE A.C.13** y el agente **A.C.14**, de la Policía Ministerial de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, se obtuvo del oficial que controla el Sistema de Emergencias 911, información relativa a la grabación de la cámara ubicada en la esquina con la calle […], donde se encuentra el establecimiento conocido como la lata de cerveza, de la que se observó, que siendo las 00:45 horas, del 09 de marzo de 2019, se detectó un vehículo de la marca Tsuru color gris o negro, circulando de manera normal sobre la calle […] con dirección a Fresnillo y que posteriormente a las 01:15 horas, ingresaron por esa misma calle dos patrullas, desconociendo su corporación.

93. Medios los anteriores, de los que se puede apreciar, que los elementos de la Policía Estatal Preventiva, no se condujeron con probidad en cuanto a los acontecimientos de los hechos, en razón a la discrepancia existente entre el argumento de la autoridad y los servidores públicos, que no tienen sustento con otro medio de prueba, en comparación con la versión del quejoso, que tiene respaldo en otras evidencias. Puesto que en primer término, no se advierte que el carro que conducía el quejoso circulara con las luces apagadas, como se desprende del informe de investigación vertido por los **CC. COMANDANTE A.C.13** y el agente **A.C.14**, de la Policía Ministerial de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, de cuya información obtenida de la citada grabación, de la cámara ubicada en la esquina con la calle […], se aprecia que precisamente a las 00:45 horas del día 09 de marzo

de 2019, (hora en que refieren los oficiales iba con las luces apagadas) circulaba ese vehículo por esa vía de manera normal.

94. Tampoco se acredita fehacientemente, que **A,** hubiere llevado un arma en la mano derecha cuando descendió del vehículo y haya apuntado e intentado disparar a los elementos de la Policía Estatal Preventiva, si tomamos en cuenta que, el sólo dicho de los servidores públicos en el que se sustenta el informe de la autoridad, sin ninguna otro dato de prueba ajeno a dicha autoridad que le de sustento, contrario a lo expuesto por el quejoso, no es suficiente para justificar su correcta actuación.

95. Resultando también insuficientes para ese efecto, el informe vertido por el **LICENCIADO EN CRIMINOLOGÍA A.C.16,** Examinador del Laboratorio de Balística Forense, así como los sendos dictámenes identificativos y de funcionalidad y el Dictamen identificativo y de funcionalidad y micro comparativo, emitidos por el referido **LICENCIADO EN CRIMINOLOGÍA A.C.16**, y el Dictamen Pericial de Campo, realizado por el Perito en Criminalística de Campo, **LCC. A.C.17**, que obran dentro de la carpeta de investigación número […], que se integró con la denuncia presentada por el agente de la Policía Estatal Preventiva **AR3,** en contra de **A,** por el delito de homicidio en grado de tentativa, toda vez que las citadas constancias solo demuestran lo que en ellas se consigna, casquillos y armas, en relación a los hallazgos encontrados en el lugar de los hechos, a la identificación, funcionalidad y características de las armas de fuego y cartuchos y la comparación de los casquillos, percutidos por las armas, mas no así lo que argumentan los elementos de la Policía Estatal Preventiva.

96. En ese contexto, con las pruebas recabadas se comprueba que los Elementos de la Policía Estatal Preventiva, desde un inicio, incurrieron en una actuación irregular, contraria a lo establecido en el ordenamiento 16 Constitucional, al pretender detener el vehículo sin ninguna aparente causa que así lo justificara, ya que quedó demostrado que **A,** no conducía el vehículo con las luces apagadas,

97. Quedó comprobado con los testimonios del personal de Protección Civil de Calera de Víctor Rosales, que los Elementos de la Policía Estatal Preventiva, una vez herido en el piso el agraviado, pretendían que éste tocara un arma, que refiere el mismo agraviado la habían tomado del vehículo que él conducía, reconociendo en su declaración ante este Organismo, **A**, que eran dos armas las que él observó en la parte trasera, de las cuales como se aprecia de las constancias, una fue encontrada por el Perito de Campo, cerca del lugar donde cayó herido el agraviado y otra encontrada en la parte trasera del vehículo. Aunado a que refirió este agraviado que luego de que no cedió para tocar el arma se retiró dicho Elemento Policial y recogió los casquillos, sin haberse comprobado, que **A**, al descender del vehículo llevara en la mano un arma de fuego, ni que con ella hubiese amenazado o apuntado al oficial **AR3**, siendo insuficiente por tanto, el dictamen pericial de campo y los dictámenes del estudio de balística, para acreditar este argumento de los servidores públicos, sin que exista algún otro dato ajeno que les de sustento.

98. Por tanto, la puesta a disposición por parte de los elementos de la Policía Estatal Preventiva, de estas personas detenidas por la comisión flagrante del delito de Homicidio en grado de tentativa cometido en perjuicio del elemento policial **AR3**, se apreció a todas luces excesiva, máxime, si tomamos en consideración que fue este agente, el que haciendo uso de su arma de cargo, disparó en contra de **A**, ocasionándole graves daños a su integridad física.

99. En ese sentido, del análisis de las anteriores evidencias y desde una perspectiva de abuso de autoridad por parte del elemento de la Policía Estatal Preventiva, que advierta el exceso en sus facultades, en el caso de **AR3,** al hacer uso de su arma de fuego, se desprende que accionó su arma de cargo, presumiblemente en dos ocasiones, en contra del **A** para impedir su fuga, quien al ir corriendo, recibió un impacto de bala cuando éste se detiene o voltea, como así lo reconoce el propio servidor público, y se desprende de las constancias que fueron analizadas.

100. Es decir, que el elemento policial **AR3,** hizo uso de su arma de cargo, sin encontrarse en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 87 fracciones I, II y III de la Ley de Instituciones Policiales de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas, conforme al principio 9, de los Principios Básicos sobre el empleo de la Fuerza y de las Armas de Fuego, por los Funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley, puesto que los elementos de la Policía Estatal Preventiva previamente siguieron a sus ocupantes en la unidad oficial por traer presuntamente las luces apagadas del vehículo que conducían, para luego perseguirlos pie a tierra, cuando éstos descendieron del mismo y echaron a correr para impedir ser detenidos, disparándoles enseguida el policía **AR3,** impactándose un proyectil en el cuerpo del agraviado que le ocasionó las lesiones anteriormente ya señaladas.

101. Puesto que aun y cuando sea verdad, que las personas detenidas, llevaban en el asiento trasero del vehículo armas de fuego, como así lo reconoce el agraviado, señalando que éstas estaban forradas con papel periódico y cinta, así como un costal, que refiere fue el motivó que los hizo bajarse del automóvil y correr.

102. Esa circunstancia, al momento de la persecución por los elementos de la Policía Estatal Preventiva y de la realización de los disparos que hiciera el policía **AR3,** era desconocida para tales Elementos Policiales, ya que el hallazgo de las armas se hizo posterior a que les dieron alcance, estando ya herido en el piso **A** y después de haber sido detenido **T2**, por el oficial **AR4,** quien refiere que después que regresó y realizó la revisión o inspección de ese vehículo, o sea, que el hallazgo de las armas de fuego, fue posterior a la realización de los disparos y a la detención del quejoso; además de que en este contexto de los hechos, no se advierte que los agentes policiales corrieran algún riesgo, amenaza, agresión o peligro inminente, para su integridad física o su vida o de otras personas, por parte del citado agraviado, así las cosas, el solo hecho de que corriera el agraviado **A** junto con su acompañante, no justifica de ninguna manera el uso adecuado del arma de fuego a cargo de este oficial, sino el uso innecesario, irracional y desproporcionado del arma de fuego.

103. No obstante, ubicándonos en la hipótesis argumentada por la autoridad, conforme a la valoración de las propias versiones de los elementos policiales, en torno a los demás datos recabados, se puede apreciar que el elemento policial **AR3,** realizó el disparo en contra del **C. A**, posterior a haberse suscitado la presunta amenaza y peligro inminente hacia su persona, que refiere, si se toma en consideración lo expuesto en el oficio número […], relativo a la puesta a disposición de los detenidos por esos elementos policiales, que el **C. AR2,** entonces Director de la Policía Estatal Preventiva, adjuntó a su informe de autoridad, del que se desprende que después de que **A** presuntivamente les apuntó varias veces con el arma al ir corriendo y al observar el oficial, que a la altura del domicilio que en el mismo precisa, el agraviado se detuvo, volteó, le apuntó con el arma, trató de dispararle y jaló el gatillo sin que se realizara la detonación, y, nuevamente cortó cartucho, que salió útil de la recámara sin ser percutido y volvió a apretar el gatillo, sin que realizara la detonación, siendo este último momento, hasta cuando el oficial refiere sintió la amenaza o el peligro inminente para su vida y la de su compañero, y le disparó; narrativa la anterior que hacen también estos oficiales en sus declaraciones ante el Ministerio Público y ante este Organismo. Esto es que, en términos de esta narrativa, los elementos policiales vieron que **A** apuntaba con el arma, y observaron en dos ocasiones los intentos del agraviado por disparar esa arma que portaba, y, al ver el oficial **AR3,** que no se realizó ninguna detonación a pesar de cortar cartucho y apretar el gatillo, es hasta entonces que este oficial accionó su arma en contra de aquél. Circunstancia la anterior que además de resultar ilógica, demuestra que los agentes no actuaron con racionalidad ni oportunidad, contraviniendo dichos principios, puesto que el empleo del uso del arma de fuego, no se realizó atendiendo a los elementos lógico objetivos en relación con los hechos, es decir, respecto de la relación y congruencia entre el medio empleado y el fin buscado, dado que éste era la detención del agresor, y en esas circunstancias, ya no representaba riesgo para ellos y por tanto no debió utilizarse el arma; toda vez que, el uso del arma de fuego debió haberse hecho de forma inmediata y en el momento mismo en que el agresor inicialmente apuntó o cortó cartucho y apretó el gatillo, que era en el momento en que la amenaza o el peligro era inminente; y no posterior a ello, cuando ya observó el agente policial que el arma de su presunto agresor no disparaba, ya que como se expuso, no se actuó observando los citados principios, con lo que se

demuestra entonces, que el uso del arma de fuego empleado por el oficial **AR3,** no se encontró legitimado, con el resultado ya conocido.

104. Por otra parte, también se desprende, que previo a la utilización del arma de fuego, los elementos policiales tenían la obligación de realizar una clara advertencia de su uso, y en caso de resultar lesionadas las personas o con pérdida de la vida, también se debió dar aviso de inmediato a sus familiares o un amigo de confianza, aparte de informar al superior, como así lo contemplan los dispositivos 87 y 93 fracción IV, de la Ley de Instituciones Policiales de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas, situación que desde luego se advierte, fue omisa por parte de estos elementos de la Policía Estatal Preventiva, como se puede apreciar de su misma narrativa, en la que solamente refieren se identificaron y le indicaron a **A**, que se detuviera y soltara el arma que presuntamente traía, pero no refieren ni se desprende que haya existido ninguna advertencia previa, de que se haría uso del arma de fuego, para intentar disuadir al agraviado o que desistiera de su resistencia; como tampoco se informó de inmediato a sus familiares de los hechos ocurridos, ni obra constancia alguna versión de imposibilidad para tal efecto, ya que tanto la quejosa **Q,** esposa del lesionado y la **T1**, madre de este agraviado, manifestaron que quien les informó vía telefónica de que **A** se encontraba en terapia intensiva, fue la trabajadora social del Hospital General de Zacatecas, y no, por parte de esos elementos o de la Policía Estatal Preventiva. Omisiones las anteriores que también contravienen lo dispuesto en los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego, por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley.

105. Aunado a la manipulación de los hechos y de no permitir de inmediato que los elementos de Protección Civil y de Bomberos trasladaran al lesionado al Hospital Comunitario, pese a haber sido informado el **COMANDANTE AR5,** de que era urgente su atención, si tomamos en consideración, el señalamiento que realiza el quejoso **A**, en el sentido de que los elementos policiales le propusieron que tocara un arma de fuego a cambio de brindarle atención médica, diciéndole que si quería que lo atendieran primero tenía que tocarla, que de esto se dieron cuenta los paramédicos, a quienes no les permitían que lo atendieran, por lo que una vez que tuvieron conocimiento del hallazgo de las armas en el vehículo que él conducía, el oficial **AR3,** tomó una de esas armas y se la llevó insistiéndole en que la tomara y a cambio se le brindaría la atención, pagaría sus gastos médicos y no pisaría la cárcel y que al negarse el agraviado, el oficial intentó obligarlo a que empuñara el arma, agarrándolo por la fuerza, subiéndose sobre él y le extendió los brazos para abrirle la mano, pero como el agraviado no cedió, se enojó este Elemento de la Policía Estatal Preventiva y lo soltó, yéndose a recoger los casquillos y fue hasta ese momento que permitieron que lo atendieran.

106. Que tiene respaldo en lo expuesto por los **CC. A.C.1** y **A.C.2,** elementos de Protección Civil y Bomberos de Calera de Víctor Rosales, quienes observaron al **COMANDANTE AR5** y al oficial **AR3,** hablando con el lesionado. Asegurando el segundo de los mencionados, que luego de realizar una valoración primaria para ver el estado generalizado del lesionado, se tardaron en subirlo a la ambulancia, un tiempo aproximado de diez minutos, pidiéndoles éstos elementos policiales que no se acercaran y que esperaran, observando cuando un oficial **(AR3),** se acercó al lesionado y le insistía que tocara un arma, diciéndole que por que él la traía, tenía que tomarla para sacarle una foto, a lo que se negaba el lesionado retirando la mano, diciendo que no la tocaría, comentándole estos oficiales al lesionado que si no la tocaba no lo llevarían a que lo atendieran, y le estaban sacando información e incluso le mostraban fotografías. Conducta de los elementos de la Policía Estatal Preventiva **AR3** y **AR5**, que desde luego se estima arbitraria y excesiva, constituyendo por tanto un abuso de autoridad por parte de dichos servidores públicos, y, en consecuencia, una vulneración a los derechos humanos del Derecho a la seguridad e integridad personal en relación al derecho a la integridad física.

107. Además, no pasa desapercibido para este Organismo que, por la naturaleza de los últimos hechos citados, los elementos de la Policía Estatal Preventiva, **CC. AR4** y **AR6**, que los acompañaban y que intervinieron en la detención del acompañante del agraviado, se

condujeron con falta de probidad, porque al darse cuenta de cómo se suscitaron los mismos, se hicieron copartícipes de sus demás compañeros, al permitir la realización de estos actos.

108. En ese contexto, retomando la opinión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación a los límites del uso de la fuerza por parte de los agentes del Estado, la cual reconoce, que los Estados a efecto de cumplir con su obligación de garantizar la seguridad y mantener el orden público dentro de su territorio, tienen derecho a hacer uso legítimo de la fuerza, haciendo énfasis en los límites a los que debe estar sujeto éste.[16]

109. Los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, destacan que la fuerza sólo debe ser usada cuando sea estrictamente necesario y en la medida indispensable, esto es, proporcional a la gravedad de la amenaza que se pretende repulsar, de forma tal, que el uso de las armas será excepcional, para lo cual deberán cumplirse los estándares y encontrarse bajo los supuestos, ya citados en el mismo instrumento en los principios 5 y 9.

110. En el caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) vs. Venezuela.[17] La Corte ha señalado que "el uso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad estatales debe estar definido por la excepcionalidad, y debe ser planeado y limitado proporcionalmente por las autoridades", o sea que, a partir de la jurisprudencia interamericana, el uso de la fuerza por parte de los agentes estatales, está limitado por la excepcionalidad y la proporcionalidad. El uso de la fuerza debe ser la *última ratio*, ya que puede ser usada sólo cuando se han agotado y fracasado todos los demás medios; es decir, si el uso de la fuerza es el primer y único recurso éste será inconvencional.[18]

111. De la misma manera, respecto al uso de armas de fuego y fuerza letal, para determinar los límites al uso de la fuerza, la Corte IDH, ha utilizado los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de las Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley.[19] Ha señalado, además, que los agentes no pueden usar armas de fuego contra las personas, salvo que sea absolutamente necesario frente a la fuerza o amenaza que se pretende resistir; debiéndose hacer sólo uso intencional de armas letales cuando sea absolutamente necesario para proteger la vida.[20]

112. Conforme al criterio del Tribunal Europeo, relativo a que, si es absolutamente necesario el uso de la fuerza letal, la Corte Interamericana señala que el Estado debe minimizar éste en la mayor medida posible, así como adoptar todas las precauciones posibles sobre la elección de los medios y métodos aplicados para su uso.[21]

113. Asimismo, la Corte IDH ha señalado que "los agentes del Estado deben distinguir entre las personas que, por sus acciones, constituyen una amenaza inminente de muerte o lesión grave y aquellas personas que no presentan esa amenaza y usar la fuerza sólo contra las primeras".[22]

114. También la Corte IDH, ha señalado los principios que deben regir el uso de la fuerza por parte de los agentes del Estado, los cuales son:

> i) legalidad, cuyos componentes son: la existencia de un marco jurídico adecuado que regule el uso de la fuerza y, que éste tenga un objetivo legítimo.

---

16 Uso de la Fuerza por parte de Agentes del Estado. Análisis desde el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. María Elisa Franco Martín del Campo. Corte IDH. Caso Rodríguez Vera y otros (Desaparecidos del Palacio de Justicia) vs. Colombia, excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, sentencia del 14 de noviembre de 2014, serie C. núm. 287, párr. 78. Corte IDH. Corte IDH. Caso Cruz Sánchez y Otros vs. Perú. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, sentencia del 17 de abril de 2015, serie C. núm. 292, párr. 262.

17 Corte IDH. Caso Montero Aranguren y otros (Reten de Catia) vs. Venezuela. Excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas, sentencia del 5 de julio de 2006, serie C, núm. 150, párr. 67; Corte IDH. Caso Zambrano Vélez y otros vs. Ecuador, fondo, reparaciones y costas, sentencia del 4 de julio del 2007, Serie C, núm. 166, párr. 83: Corte IDH. Caso Familia Barrios vs. Venezuela, fondo, reparaciones y costas, sentencia del 24 de noviembre de 2011, serie C, núm. 237, párr. 49.

18 Ibidem.

19 Ibid.

20 Corte IDH. Caso Hermanos Landaeta Mejías y otros vs. Venezuela, excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, sentencia del 27 de agosto de 2014, serie C, núm. 281, párr. 131. Corte IDH. Caso Cruz Sánchez y otros vs. Perú, op cit. párr. 264. Corte IDH, Caso García Ibarra y otros vs, Ecuador, excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, sentencia del 17 de noviembre de 2015, serie C. núm. 306, párr. 112.

21 Corte IDH. Caso Cruz Sánchez y otros vs. Perú, op cit. párr. 283.

22 Corte IDH. Caso Cruz Sánchez y otros vs. Perú, op cit. párr. 264.

ii) Absoluta necesidad: El uso de la fuerza solo puede tener lugar frente a la inexistencia o falta de disponibilidad de otros medios de acuerdo con las circunstancias del caso. La *última ratio* debe ser el empleo del uso de la fuerza por parte de los agentes estatales.

La Corte IDH, en la interpretación de este principio, ha retomado el criterio del Tribunal Europeo respecto a que no se acredita la absoluta necesidad para usar la fuerza contra personas que no representan un peligro directo, a pesar de que esto implique la pérdida de la oportunidad de su captura.[23]
La Corte IDH ha analizado el principio de necesidad junto al principio de humanidad y al respecto ha señalado que "el principio de humanidad complementa y limita intrínsecamente el principio de necesidad, al prohibir las medidas de violencia que no son necesarias (es decir, relevantes y proporcionadas) para el logro de una ventaja militar definitiva.

iii) Proporcionalidad. Implica que el uso de la fuerza utilizado sea congruente con la resistencia ofrecida, así como con el peligro real existente. Exige este principio para las y los agentes del Estado, tomar medidas que les permitan adoptar un criterio de uso diferenciado y progresivo de la fuerza, medidas tales como determinar el grado de cooperación, resistencia o agresión de la persona a quien se pretende intervenir; así como el empleo de técnicas negociación y control, y en última instancia de uso de la fuerza;[24] asimismo "este principio exige que el funcionario encargado de hacer cumplir la ley busque en toda circunstancia reducir al mínimo los daños y lesiones que pudieran causarse a cualquier persona, así como utilizar el nivel de fuerza más bajo necesario para alcanzar el objetivo legal buscado.[25] Para determinar si el uso de la fuerza es proporcional debe evaluarse la gravedad de la situación enfrentada por el/la agente estatal; para ello, los siguientes elementos de contexto son importantes: la intensidad y peligrosidad de la amenaza, la forma de proceder de la persona, el entorno, así como los medios que tenía el funcionario."[26] La Corte IDH ha relacionado el principio de proporcionalidad con la planeación de medidas preventivas, ya que aquél implica una evaluación de la razonabilidad del uso de la fuerza.[27]

115. Además es obligación del Estado, dotar de distintos tipos de armas, municiones y equipos de protección, a las y los agentes estatales facultados para hacer uso de la fuerza, el cual les permitirá que, de manera proporcional, realmente, ajusten su fuerza a los hechos en los que intervengan y así limitar el uso de armas letales, con las que se puede causar lesiones o la muerte, de manera tal que, con ello puedan cumplir con su obligación de regirse por los principios antes señalados.

116. Así las cosas, se afirma pues, que los elementos de la Policía Estatal Preventiva, desplegaron el uso de la fuerza policial de forma ilegitima, innecesaria y desproporcional, sobre **A,** al utilizar indebidamente el arma de fuego de cargo por parte del oficial **AR3,** disparándola contra el agraviado para detenerlo, cuando éste echó a correr para impedir ser alcanzado, con la cual le ocasionó lesiones graves, así como el uso abusivo e innecesario de la fuerza que ejercieron, los elementos policiales **AR3** y **AR5**, para obligarlo a que empuñara un arma, sin lograrlo y para mantener el control de la situación para tal efecto, intentando justificar su ilegal acción, sin observar los Estándares y Principios Básicos sobre el empleo de la Fuerza y de las Armas de Fuego que deben cumplir los Agentes Estatales.

117. Si tomamos en consideración, que en el presente caso, el uso de la fuerza y del arma de fuego, fue indebido, innecesario y desproporcional con la resistencia opuesta por el agraviado inicialmente, ante la disposición de otros medios para tal efecto, ya que, como

---

23 Corte IDH. Caso Nadege Dorzema y otros vs. República Dominicana, op. cit. párr. 85; Corte IDH. Caso Hermanos Landaeta Mejías y otros vs. Venezuela, op cit. párr. 134; Corte IDH. Caso Cruz Sánchez y otros vs. Perú, op cit. párr. 265.

24 Ibidem.

25 Corte IDH. Caso Hermanos Landaeta Mejías y otros vs. Venezuela, op cit. párr. 136.

26 Ibidem.

27 Corte IDH. Caso Nadege Dorzema y otros vs. República Dominicana, op. cit. párr. 87; Corte IDH. Caso Hermanos Landaeta Mejías y otros vs. Venezuela, op cit. párr. 130; Corte IDH. Caso Tarazona Arrieta y otros vs. Perú, excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas, sentencia del 15 de octubre de 2014, serie C. núm. 286, párr. 162.

puede apreciarse, luego de ser perseguido por la unidad policial número 603, en la que iban a bordo 4 elementos de la Policía Estatal Preventiva, el automóvil que conducía el agraviado, en el que viajaban él y su acompañante, fue a detenerse, descender del vehículo y correr para intentar que se les diera alcance e impedir ser detenidos, debido a que refiere el agraviado, le dio miedo al haber observado las armas que traía en la parte trasera del vehículo que conducía y de las cuales también hasta ese momento los agentes policiales tenían desconocimiento.

118. Por lo que si bien, la resistencia opuesta por el agraviado era activa consistente sólo en huir, la misma, no representaba ningún riesgo o peligro inminente para la vida e integridad personal de otras gentes ni de los elementos de la Policía Estatal Preventiva, mismos que, además, contaban con otros medios para detenerlo, puesto que los perseguidos eran dos y los elementos policiales cuatro; el vehículo que conducía el agraviado, había sido abandonado cuando echaron a correr él y su acompañante, sin embargo, sin existir planeación u organización alguna por parte de estos agentes del Estado, los oficiales se fueron también corriendo detrás de ellos, dos atrás de cada uno, no obstante, en lugar de correr uno por cada uno y haber usado además la patrulla para darles alcance, puesto que la distancia aproximada entre el quejoso y el agraviado era de media cuadra, como así lo asevera éste, o de aproximadamente 15 metros en la persecución del otro acompañante, como lo afirma el oficial **AR6**, no obstante, el elemento de la Policía Estatal Preventiva, **AR3,** sin observar los principios del uso de la fuerza como "*última ratio"* y los principios de la utilización del arma de fuego, hizo indebidamente uso de un arma letal hacia la persona que perseguía, al realizar los disparos con el arma de fuego de cargo, hacia la integridad física del agraviado, ocasionándole las lesiones descritas en las notas médicas que pusieron en peligro su vida, cuando la utilización del arma letal no debe utilizarse a excepción de que exista una amenaza o peligro inminente para la vida o la integridad personal, se trate de un delito grave, y no existan otros medios más practicables y menos perjudiciales al alcance de los agentes Estatales, sin que en el caso concreto, se encuentre justificado el caso de excepción.

119. Aparte de que, una vez lesionado, ante la resistencia pasiva que opuso agraviado **A**, al negarse por todos los medios a t el arma que pretendían los elementos de la Policía Estatal Preventiva **AR3** y AR5 que tocara, ejercieron éstos, el empleo abusivo de la fuerza y control de la situación, con la que pretendían justificar su ilegal actuar, luego de que le dispararon al agraviado y después de enterarse de que en el vehículo en el que viajaban los detenidos se encontraron armas, para forzar al agraviado físicamente, el cual se encontraba tirado en el piso y lesionado, a tomar un arma de fuego, al agarrarlo por la fuerza, subiéndose sobre su cuerpo y extendiéndole los brazos para intentar abrirle las manos a efecto de obligarlo a que agarrara el arma, además de no permitir a los elementos de Protección Civil, su atención y traslado inmediato al hospital para que fuera atendido con prontitud, hasta en tanto no hiciera el agraviado lo que los oficiales le pedían que era tocar el arma de fuego, no obstante de ser informados los oficiales, que la persona requería de atención médica urgente.

120. Con lo que se demuestra también que el uso de la fuerza tanto de maltrato como de la amenaza o intimidación, no eran necesarios, puesto que la resistencia del pasivo lo era negarse y oponerse a tocar un arma que él no había accionado en esos hechos, y que, por tanto, la fuerza empleada por los elementos policiales era innecesaria, desproporcional, abusiva y no guardaba congruencia con la resistencia opuesta por el agraviado.

121. Así las cosas, se concluye que la actuación realizada por parte de **AR3,** elemento de la Policía Estatal Preventiva, por el uso indebido de su arma de fuego de cargo, al realizar los disparos en contra de **A**, produciéndole las lesiones descritas en la hoja de ingreso y egreso del Hospital General, sin haberse comprobado ninguna de las hipótesis que justificaran el empleo legal o permisible del arma de fuego. Aunado al incumplimiento de la obligación de advertencia sobre el uso de arma de fuego previo al empleo de la misma y al aviso a los familiares del agraviado, sobre las lesiones causadas. Así como, el uso abusivo de la fuerza y del control de la situación, impidiendo que se le brindara la atención inmediata por los paramédicos de Protección Civil, por parte **AR3** y de **AR5,** realizado una vez lesionado el agraviado, para obligarlo a que empuñara un arma, mediante la fuerza física y amenazas,

resulta a todas luces un uso excesivo de la fuerza pública que constituye una violación a los derechos humanos del quejoso, específicamente del derecho a la integridad y seguridad personal en relación al derecho a la integridad física de **A**, y la coparticipación por parte de los demás Elementos de la Policía Estatal Preventiva que participaron **CC. AR4** y **AR6**, respecto del abuso excesivo de la fuerza; en contravención con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 16 de los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 1º, de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 5 numeral 1 y 7 numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Todo lo cual debe serles reprochable a los referidos servidores públicos a título de responsabilidad administrativa.

VII. CONCLUSIONES DEL CASO

1. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, repudia la violación de los derechos humanos de las personas en condiciones de vulnerabilidad, en el caso de personas a quienes se persiguen y detienen, y reprueba la actuación excesiva y abusiva de la autoridad que al detenerlos y mantenerlos bajo su dominio, en el ejercicio de sus facultades, se exceden en sus atribuciones y en el empleo de la fuerza o en el uso de las armas de fuego, afectando sus derechos a la integridad y seguridad personal.

2. En el presente caso, se vulneró el derecho a la integridad y seguridad personal en relación con el derecho a la integridad física de **A**, por parte de los **CC. AR3** y **AR5,** por el uso excesivo y abusivo de la fuerza y el uso indebido del arma de fuego, al no observar los estándares y principios del empleo de la fuerza y de armas de fuego, contemplados en la Ley de Instituciones Policiales de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas, la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y, los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y las Armas de Fuego, por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley.

3. Pues se encontró demostrado que el oficial **AR3,** sin ajustar su actuar a los principios que regulan el uso de la fuerza y armas de fuego, disparó indebidamente su arma de fuego de cargo, impactándose un proyectil del arma de fuego en la corporeidad de **A**, cuando éste corría para evitar ser detenido, cayendo al piso gravemente herido, sin que se encontrara legitimada su actuación.

4. También se comprobó que dicho impacto de arma de fuego, le ocasionó a **A**, lesiones graves en el abdomen, área hepática y colon transverso, que pusieron en peligro la vida y tardaron en sanar más de quince días, habiendo sido trasladado al Hospital Comunitario de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas, y trasferido para su atención médica al Hospital General de Zacatecas, “Luz González Cosío”, donde fue intervenido quirúrgicamente.

5. Además, se comprobó, que el servidor público **AR3,** incumplió con la advertencia de alerta sobre el empleo de arma de fuego, previo uso de la misma en contra del agraviado para disuadirlo o persuadirlo que desistiera de su intento de huida; y, posteriormente, omitió el aviso a los familiares del lesionado y agraviado sobre las lesiones ocasionadas y su traslado a recibir la atención médica.

6. Asimismo, también se demostró, el uso abusivo de la fuerza física y el control de la situación para pretender justificar su actuación, que ejercieron los **CC. AR3** y **AR5,** impidiendo que se le brindara la atención inmediata a **A,** por parte de los elementos de Protección Civil, al manipular los hechos y obligar a que el lesionado y agraviado empuñara una de las armas, al agarrarlo por la fuerza, subirse sobre su cuerpo y extenderle los brazos para que abrirle las manos e intentar que tomara una de las armas, con la amenaza de que no se le atendería hasta en tanto no lo hiciera, retardando la atención médica del lesionado y agraviado. Lo cual debe ser reprochable a estos servidores públicos y a los demás Elementos de la Policía Estatal Preventiva, que intervinieron por su coparticipación en los hechos, a título de responsabilidad administrativa.

VIII. REPARACIONES

1. De conformidad con lo establecido en lo establecido en los artículos 1°, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 51 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, al acreditarse violaciones a los derechos humanos de **A,** atribuibles a servidores públicos de carácter estatal, la Recomendación formulada al respecto debe incluir las medidas que procedan para lograr la efectiva restitución de las personas afectadas en sus derechos.

2. Dicha reparación de conformidad con los *"Principios Básicos sobre el Derecho de las Víctimas de Violaciones manifiestas de las normas internacionales de Derechos Humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones",* adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 2005, las violaciones de derechos humanos deben contemplar de forma apropiada y proporcional a la gravedad de ésta una reparación plena y efectiva en las formas siguientes: restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición.[28]

A) De la indemnización.
1. La indemnización ha sido reconocida como una medida que tiende a compensar a las víctimas por afectaciones materiales sufridas con motivo de la falta que ha cometido el Estado en su perjuicio, entre ellos, el daño emergente, el lucro cesante y el daño moral sufrido por el agraviado; lo que no puede implicar ni un empobrecimiento ni un enriquecimiento para la víctima o sus sucesores.

2. En el caso que nos ocupa, y en virtud de los hechos anteriormente vertidos, se considera que es procedente la indemnización para **A**, quien sufrió un daño físico, con las lesiones que le fueron inferidas, por lo cual deberá ser registrado en el Registro Estatal de víctimas para su debida indemnización, en los términos que la Ley prevé y sujeto a las condiciones que contempla este ordenamiento legal.

B) De la Rehabilitación.
1. La rehabilitación debe incluir la atención médica, así como los servicios jurídicos y sociales[17], que resulten necesarios, en el caso que nos ocupa, la rehabilitación se refiere a la adquisición de las nuevas competencias que requieran las nuevas circunstancias en que se encuentren las víctimas como consecuencia de la lesión de la que hubieran sido objeto, siempre y cuando se haya materializado esta situación. En el caso que nos ocupa, la rehabilitación de la víctima debe centrarse en el restablecimiento, en toda la medida de lo posible de su salud física en caso de que ello resulte necesario, para lo cual deberá evaluarse su condición física en cuanto a la afectación sufrida.

2. La rehabilitación debe tomar en cuenta los gastos que ha realizado el agraviado derivado de la afectación a su salud; además atención médica, psicológica y/o tratamiento de rehabilitación en caso de que la víctima así lo decida y lo necesite, por ende, se ordena aplicar tratamientos de rehabilitación a **A**, a cargo del Estado, una vez generada la evaluación en términos de la resolución específica a que se alude en el apartado siguiente, siempre y cuando esto resulte necesario.

C) De la Satisfacción.
1. Estas medidas contemplan la verificación de los hechos y la relevación de la verdad, así como aplicación de sanciones jurídicas o administrativas a los responsables de las violaciones.

1. Respecto a este concepto, de conformidad con lo establecido por los Principios sobre el derecho a obtener reparaciones, ésta debe incluir, cuando sea el caso, la totalidad o parte de las medidas siguientes: a) medidas eficaces para conseguir que no se continúe con las violaciones; b) la verificación de los hechos y la revelación pública y completa de la verdad;

---

28 Principios 19, 20, 21 a), 22 y 23.

c) una declaración oficial o decisión oficial que restablezca la dignidad, la reputación y los derechos de la víctima; d) una disculpa pública y; e) la aplicación de sanciones judiciales o administrativas a los responsables de las violaciones.

2. Este Organismo considera que, la Secretaría de Seguridad Pública, deberá iniciar los procedimientos administrativos a que haya lugar en contra de los oficiales **AR5, AR3, AR4** y **AR6**, respectivamente Comandante y oficiales de la Policía Estatal Preventiva de Zacatecas, que vulneraron los derechos humanos del agraviado **A** y que motivaron la presente resolución, hechos constitutivos de violación al derecho a la integridad personal.

D) De las Garantía de no repetición.
1. Este Organismo estima que la capacitación a los servidores públicos debe continuar implementándose y debe materializarse en programas y cursos permanentes de preparación en temas de respeto a los derechos humanos, particularmente aquellos relativos al uso legítimo de la fuerza pública y armas de fuego, para efecto de garantizar la no repetición de actos infractores a derechos humanos por parte de los agentes involucrados.

2. Asimismo, esta Comisión considera trascendente fortalecer las capacidades institucionales mediante capacitación sobre los principios de protección a los derechos humanos y sobre los límites a los que deben estar sometidas, y al empleo de la Fuerza y Armas de fuego, a fin de evitar que hechos como los sufridos por el agraviado se vuelvan a presentar.

IX. RECOMENDACIONES

Por lo anterior, y con fundamento en los 1 y 102 apartado B de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, y los artículos 2, 3, 4, 8, 17, 37, 51, 53, 54, 56, 57 y 58 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, se emitan las siguientes Recomendaciones.

PRIMERA. Dentro de un plazo máximo de un mes, contando a partir de la notificación de la presente Recomendación, se inscriba a **A**, victima directa, en el Registro Estatal de Victimas, a fin de que tenga acceso a los servicios y al Fondo de Atención Previsto en dicha Ley y a lo señalado en el apartado VIII de esta Recomendación y se envíen a esta Comisión las constancias con que se acredite su cumplimiento.

SEGUNDA. Dentro de un plazo máximo de tres meses, contados a partir de la aceptación de esta Recomendación, se valore y determine si **A,** requiere de atención médica o psicológica y/o tratamiento de rehabilitación, por las lesiones que le fueron causadas por el proyectil de arma de fuego y el uso abusivo de la fuerza, que realizaron los elementos policiales señalados como responsables y de ser el caso, se le otorgue la atención necesaria y gratuita que requiera hasta que alcance su total sanación física o psicológica, esta última, por algún posible trauma que se le ocasionara en el evento sufrido. Enviando a este Organismo las constancias que acrediten su cumplimiento. De igual forma, se realice el pago de la indemnización por los gastos erogados con motivo de la atención médica requerida, por las lesiones que sufrió en su integridad física, derivada del incorrecto actuar de los elementos de la Policía Estatal Preventiva.

TERCERA. Dentro de un plazo máximo de tres meses, contados a partir de la aceptación de esta Recomendación, se diseñen e implementen programas de capacitación, dirigidos a los Elementos de la Policía Estatal Preventiva, en materia de Derechos Humanos en los que se aborden, específicamente, el Derecho a la Integridad Física y Psicológica de las personas detenidas, así como en el Uso de la Fuerza Pública y Armas de Fuego, y la prevención del Abuso de Autoridad, que les permita identificar los actos u omisiones que generan violaciones a los derechos humanos; así como las conductas sancionadas por la ley en que incurren en el ejercicio de sus funciones a fin de incidir en la erradicación de estas conductas, y se envíen a esta Comisión de Derechos Humanos las constancias con las que se acredite su cumplimiento.

CUARTA. Dentro de un plazo máximo de tres meses, contados a partir de la aceptación de esta Recomendación, se implementen programas de sensibilización a los elementos de la Policía Estatal Preventiva, respecto de las normas, lineamientos existentes en materia de respeto y protección de la integridad personal, así como del empleo de la Fuerza y Uso de Armas de fuego de cargo, para evitar lesiones y muerte, y en su defecto, realizar las alertas previas de advertencia sobre el uso de la armas de fuego y la información inmediata a los familiares en caso de ocasionar lesiones o muerte.

QUINTA. Dentro de un plazo máximo de tres meses, contados a partir de la aceptación de esta Recomendación, se instruya al Órgano Interno de Control, y/o Unidad de Asuntos Internos, de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas, conforme a sus atribuciones, a fin de que se resuelva el procedimiento administrativo de responsabilidad en contra de los **CC. AR3, AR5, AR4** y **AR6,** servidores públicos involucrados y determine las sanciones específicas a que se hayan hecho acreedores por los hechos en que incurrieron en la vulneración a los derechos humanos del agraviado, remitiendo para tal efecto a este Organismo, las constancias que justifiquen su cumplimiento.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 53, párrafo segundo de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, se hace del conocimiento de la autoridad a la que va dirigida esta Recomendación, que dispone de un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente en que esta se notifique, para que manifieste si la acepta o no, en el entendido de que, de no aceptarla, su respuesta se hará del conocimiento de la opinión pública, en caso de que la acepte, se le notifica que dispone de un plazo de 15 días, contados a partir del vencimiento del término del que disponía para responder sobre la aceptación, a fin de enviar las pruebas de su cumplimiento.

Por último, hágasele saber al quejoso que, de conformidad con el artículo 61 de la Ley de este Organismo, dispone de 30 días naturales, computadas a partir de la fecha de notificación del presente documento, para que en caso de que exista inconformidad con la misma, interponga el recurso de impugnación correspondiente ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Así lo determina y firma.

DRA. EN D. MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOS
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO

Expediente: CDHEZ/140/2017

Queja: Oficiosa.

Personas agraviadas: Personas privadas de la libertad en el Centro Regional de Reinserción social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas.

Autoridades Responsables:

I. Director General de Prevención y Reinserción Social del Estado de Zacatecas.
II. Director y personal de seguridad y custodia del Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas.
III. Director y elementos de la Policía Estatal Preventiva de Zacatecas.
IV. Elementos de la Policía Metropolitana de Zacatecas.

Derecho Humano vulnerado:
I. Derecho a la integridad y seguridad personal, en relación con el deber del Estado garante, de las personas privadas de su libertad.

Zacatecas, Zacatecas, a 12 de diciembre 2021, una vez concluida la investigación de los hechos que motivaron el expediente CDHEZ/140/2017, y analizado el proyecto presentado por la Segunda Visitaduría, la suscrita aprobó, de conformidad con los artículos 4, 8 fracción VIII, 17 fracción V, 37, 51, 53 y 56 de la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, en relación con lo dispuesto por los numerales 80, 81, 82, 83, 84, 85 y 86 de su Reglamento Interno vigente al momento del inicio del presente procedimiento, la **Recomendación 56/2021** que se dirige a la autoridad siguiente:

GRAL. BGDA. D.E.M. RET. ADOLFO MARÍN MARÍN, Secretario de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas, por los hechos ocurridos durante el mandato del **GRAL. BGDA. D.E.M. RET FLOYLAN CARLOS CRUZ**, otrora Secretario de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas.

R E S U L T A N D O:

I. DE LA CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

1. De conformidad con los artículos 6o, apartado A, fracción II y 16, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 23 y 85 de la Ley de Trasparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, los datos personales de los agraviados, así como aquellos relativos a la vida privada y familiar, relacionadas con esta resolución, permanecen confidenciales, ya que éstos no son públicos.

II. RELATORÍA DE LOS HECHOS Y OBJETO DE LA CONTROVERSIA.

1. El 04 de abril de 2017, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, párrafo tercero de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, este Organismo emitió acuerdo de admisión de queja oficiosa, por los hechos ocurridos el día 10 de enero de 2017, al interior del Centro de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas, con motivo del operativo de revisión, en el que presuntamente se vulneraron los derechos humanos de las personas privadas de su libertad en dicho centro.

Por razón de turno, el 05 de abril de 2017, se remitió el acuerdo de admisión de queja oficiosa al Departamento del Sistema Penitenciario de este Organismo, bajo el número de expediente citado al rubro, a efecto de formular el correspondiente acuerdo de calificación, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 55 y 56 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, vigente al momento del inicio del presente procedimiento.

El 05 de abril de 2017, los hechos se calificaron como una presunta violación al derecho a la integridad y seguridad personal, en relación con el deber del Estado garante, de las personas privadas de su libertad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 55 y 56, fracción I, del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, vigente al momento de inicio del procedimiento.

El 23 de junio de 2017, el expediente de queja fue remitido a la segunda Visitaduría General para su trámite consecutivo.

2. Los hechos materia de la queja consistieron en lo siguiente:
El día 5 de abril de 2017, se inició queja oficiosa, a razón de las notas periodísticas publicadas en los diarios de circulación estatal “Meganoticias TVC”, “Gala tv Zacatecas”, “Mirador”, “Imagen”, “Página 24”, “La Jornada Zacatecas”, “El Sol de Zacatecas”, y “AccesoZac”; respectivamente, con los títulos: “Investigaran presunto abuso de Derechos Humanos en cárcel de Zacatecas”, “Imágenes de reos desnudos sí son del Cerereso, pero no de la actual administración SSP”, “Comisión de Seguridad Pública y Justicia sin queja por violencia a reos”, “Investigarán presuntos actos de tortura al interior del Cereso”, “Vejaciones no fueron en esta administración: Froylan”, “Internos del Cereso Denuncian Tortura y Violaciones a sus Derechos Humanos” y “Denuncian reos de Cieneguillas abusos: CDHEZ investiga”.

Los días 6, 7 y 10 de abril de 2017, las personas privadas de su libertad que resultaron agraviados, ratificaron la queja oficiosa iniciada a su favor, aclarando y precisando los hechos motivo de la misma.

Hechos en los que, en esencia señalaron que, el 10 de enero de 2017, se realizó operativo de revisión en el Centro de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas, por parte de elementos de la Policía Estatal Preventiva y elementos de la Policía Metropolitana de Zacatecas, los cuales presuntamente les ordenaron que salieran de sus celdas, que se desnudaran y, posteriormente, se acostaran sobre el piso boca abajo, interrogándolos sobre diversas circunstancias, agrediéndolos física y verbalmente, y que, al revisar sus celdas les tiraron sus pertenencias al piso, dañándolas, sustrayendo objetos y dinero, para finalmente ubicarlos en sus respectivas celdas, donde los dejaron castigados por un lapso de 3 días.

3. Informes de las autoridades involucradas:
   - El 17 de abril de 2017, se recibió en este Organismo, informe de autoridad rendido por el **LICENCIADO OSCAR GILBERTO MARTINEZ LIRA**, otrora Director del Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas.
   - El 18 de abril de 2017 el **GENERAL DE BRIGADA D.E.M. RET. FROYLAN CARLOS CRUZ,** entonces Secretario de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas, remitió informe de autoridad.
   - El 15 de agosto de 2017, se recibió en este Organismo, informe de autoridad rendido por el **COMANDANTE JUAN CARLOS PARRA CRUZ**, Sub Director de la Policía Metropolitana de Zacatecas, por ausencia del **COMANDANTE JESÚS GABRIEL ZARRAGA POBLANO,** director de dicha corporación policial.
   - El 18 de agosto de 2017, se recibió en este Organismo, informe de autoridad rendido por el **LIC. JORGE EDUARDO ALTAMIRANO**, Subsecretario de Inteligencia Política Criminal y Vinculación Ciudadana de la Secretaría de Secretaría de Seguridad Pública; por ausencia del **GENERAL DE BRIG RET. IGNACIO LÓPEZ FLORES,** entonces Director General de Prevención y Reinserción Social en el Estado.

III. COMPETENCIA.

1. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas es competente, en los términos de los artículos 1º, 4º, 6º, 8º, fracción VII, inciso A) y 31, de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, en relación con los numerales 15, 16 y 17, de su Reglamento Interno vigente al momento del inicio del procedimiento, en razón de que la queja se promovió en contra de servidores públicos adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, por hechos ocurridos en el año 2017, al interior del Centro de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas.

2. De conformidad con los artículos 55 y 56, del Reglamento Interior de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, vigente al momento del inicio del procedimiento, este Organismo advierte que de los hechos narrados se puede presumir una violación al derecho a la integridad y seguridad personal, en relación con el deber del Estado garante, de los diversos agraviados, en calidad de personas privadas de su libertad en el Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas, así como la probable responsabilidad por parte de los servidores públicos señalados.

3. Esta Comisión presumió la violación al siguiente derecho:

a) Derecho a la integridad y seguridad personal, en relación con el deber del Estado garante de las personas privadas de su libertad.

IV. PROCEDIMIENTO ANTE LA COMISIÓN.

Con la finalidad de documentar las presuntas violaciones a derechos humanos, así como para determinar la existencia o no de responsabilidad por parte de los servidores públicos señalados, este Organismo realizó entrevistas a las personas privadas de la libertad relacionadas con los hechos; se recabaron comparecencias de elementos de las Policía Estatal Preventiva de Zacatecas y de la Policía Metropolitana del Estado, así como de personal penitenciario adscrito al Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas; se solicitaron informes a las autoridades señaladas como responsables, así como informes en vía de colaboración; se revisaron grabaciones relacionadas con los hechos; se consultaron notas periodísticas emitidas por diversos medios de comunicación y se realizó investigación de campo.

V. PRUEBAS.

Con base en lo estipulado en los artículos 48 y 49 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, en relación con los numerales 64 y 65 del Reglamento Interior de este Organismo, durante el procedimiento realizado por esta Institución, se recabaron los elementos probatorios documentales, remitidos tanto por los agraviados como por las autoridades señaladas como responsables, así como de las declaraciones que a continuación se detallan:

VI. CONSIDERACIONES PREVIAS

1. Los **CC. P1, P2, P3, P4, P5, P6 y P7,** entonces elementos de la Policía Estatal Preventiva, causaron baja de la corporación, respectivamente, en fechas 10 de abril de 2017, 02 de febrero de 2017, 18 de julio de 2017, 01 de marzo de 2017, 04 de mayo de 2017, 02 de abril de 2017, 06 de junio de 2017.

De la misma forma, **P8**, elemento de la Policía Metropolitana, también dejó de prestar sus servicios para la corporación policial de adscripción, al igual que, **P9** y **P10**, Policías Penitenciarios del Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas, quienes causaron baja en fecha 14 de marzo de 2017.

VII. SOBRE LOS DERECHOS VULNERADOS.

A. Violación al derecho a la integridad personal, en relación con el deber del Estado a garantizar el derecho a la integridad física y psicológica de las personas privadas de su libertad.

1. “El derecho a la integridad personal es aquél que tiene todo sujeto para no sufrir tratos que afecten su estructura corporal, sea física, fisiológica o psicológica, o cualquier otra alteración en el organismo que deje huella temporal o permanente, que cause dolor o sufrimiento grave con motivo de la injerencia o actividad dolosa o culposa de un tercero.”[1]

2. Al respecto, la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 3 establece, que “[t]odo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.” De ahí que, la obligación de velar por el respeto y garantía de los derechos humanos, corresponde al Estado, como ente garante de éstos. En ese contexto, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, señala en su artículo 1.1, que los Estados, “se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción” sin discriminación alguna. Estas obligaciones generales de respeto y garantía, vinculantes para el Estado con respecto a toda persona, implican para éste un mayor nivel de compromiso al tratarse de personas en situación de riesgo o vulnerabilidad.”[2]

3. En ese sentido, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, precisa en su artículo 5.2, que “[t]oda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.”[3] Incluso, “la Comisión Interamericana otorga especial atención a la situación de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad física. El hecho de que tales personas se encuentren en una situación de especial vulnerabilidad, aunado a la frecuente falta de políticas públicas al respecto que otorguen la prioridad que el tema merece, implica frecuentemente que las condiciones penitenciarias se caractericen por la violación sistemática de los derechos humanos de tales personas.”[4]

4. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos, respecto de la obligación del Estado como garante de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, ha establecido que “[e]n los términos del artículo 5.2 de la Convención toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal y el Estado debe garantizarle el derecho a la vida y a la integridad personal. En consecuencia, el Estado, como responsable de los establecimientos de detención, es el garante de estos derechos de los detenidos.”[5] Además, “ha establecido que de las obligaciones generales de respetar y garantizar los derechos, derivan deberes especiales, determinables en función de las particulares necesidades de protección del sujeto de derecho, ya sea por su condición personal o por la situación específica en que se encuentre…”.[6]

5. Asimismo, ha señalado que “[f]rente a las personas privadas de libertad, el Estado se encuentra en una posición especial de garante, toda vez que las autoridades penitenciarias ejercen un fuerte control o dominio sobre las personas que se encuentran sujetas a su custodia. De este modo, se produce una relación e interacción especial de sujeción entre la persona privada de libertad y el Estado, caracterizada por la particular intensidad con que el Estado puede regular sus derechos y obligaciones y por las circunstancias propias del

---

[1] CNDH Recomendación 69/2016 de fecha 28 de diciembre de 2016, párr. 135 y Recomendación 71/2016 del 30 de diciembre de 2016, párr. 111.

[2] Informe sobre los derechos humanos de las personas privadas de libertad en la Américas. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, https://www.oas.org/es/cidh/ppl/docs/pdf/ppl2011esp.pdf, párr. 46, de fecha de acceso 11 de julio de 2017.

[3] **CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS (Pacto de San José)**, http://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm, fecha de consulta 28 de diciembre de 2020.

[4] Segundo Informe sobre los Derechos Humanos en el Perú. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cap. IX, párr.1, https://www.cidh.oas.org/countryrep/Peru2000sp/capitulo9.htm, fecha de consulta 28 de diciembre de 2020.

[5] CrIDH. Caso Neira Alegría y otros Vs.Perú, Sentencia de 19 de enero de 1995, párr. 60.

[6] Caso Vélez Loor Vs. Panamá, Sentencia de 23 de noviembre de 2010 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), párr. 98

encierro, en donde al recluso se le impide satisfacer por cuenta propia una serie de necesidades básicas que son esenciales para el desarrollo de una vida digna."[7]

6. De ahí, que cuando el Estado priva de la libertad a una persona, asume una responsabilidad especial relacionada con el respeto y la garantía de sus derechos; ya que, tanto la seguridad como la integridad de éstas, queda bajo su custodia. Por ello, uno de los principales deberes del Estado consiste en ejercer un control efectivo sobre la seguridad interna de los centros penales a su cargo. Pues en la medida en que sea capaz de garantizar dicho aspecto, podrá garantizar los derechos humanos de las y los reclusos.[8] Si el estado es incapaz de mantener el orden y seguridad al interior de los centros penales, será incapaz de cumplir con el objetivo esencial de la pena privativa de libertad; la reforma y la readaptación social de las y los internos.

7. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el respeto a los derechos humanos es un pilar fundamental del sistema penitenciario en México, cuya finalidad es la reeducación y reinserción social de los condenados, con base en el trabajo, la educación, la salud y el deporte.[9] En el mismo sentido, el Comité de Derechos Humanos ha establecido que, las personas privadas de la libertad, gozan de todos los derechos humanos protegidos por las normas nacionales e internacionales en la materia, sin perjuicio de las restricciones inevitables en condiciones de reclusión.[10]

8. La Corte Interamericana ha señalado que, toda restricción a los derechos humanos de las personas privadas de su libertad; debe demostrar fehacientemente la necesidad de ésta y regular rigurosamente la limitación de que serán objeto. Asimismo, ha establecido que existen derechos como la vida, la integridad, el debido proceso, entre otros, cuya limitación o restricción está prohibida; ya que, toda persona privada de su libertad tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal y el Estado debe garantizarle el derecho a la vida y a la integridad personal. En consecuencia, el Estado como responsable de los establecimientos de detención, es el garante de estos derechos de los detenidos.[11]

9. Posteriormente, a través del caso Instituto de Reeducación de Menor, la Corte determinó que, la garantía de esos derechos corresponde al Estado ya que el interno se encuentra bajo su sujeción y la compurgación de su pena, debe limitarse a la restricción del derecho a la libertad, no anular su titularidad respecto a los diversos derechos humanos que le asisten. Es decir, al privarse de la libertad a una persona, el Estado coloca a ésta en una institucionalización total, ya que al permanecer en un centro de reclusión los diversos aspectos de su vida se someten a una regulación y control absoluto que, entre otros aspectos, disminuyen radicalmente las posibilidades de autoprotección.

10. Por otro lado, el reconocimiento de la dignidad humana inherente a toda persona, con independencia de sus condiciones particulares o situación jurídica, es una disposición universalmente aceptada en el derecho internacional. En consecuencia, instrumentos como la Declaración Americana y la Convención Americana, reconocen el derecho a la integridad personal de toda persona sujeta a la jurisdicción del Estado.[12] Al respecto el Comité de Derechos Humanos ha establecido que el trato humano y respeto de la dignidad de las personas privadas de su libertad es una norma de aplicación universal, que no depende de los recursos materiales del Estado. En el mismo sentido, los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, reconocen que todas las personas privadas de su libertad que estén sujetas a la jurisdicción del Estado

---

[7] CrIDH. Caso "Instituto de Reeducación del Menor" Vs. Paraguay. Sentencia de 2 de septiembre de 2004 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), párr.152.

[8] Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe sobre los derechos humanos de las personas privadas de libertad en la Américas, aprobado el 31 de diciembre de 2011, págs. 3-6.

[9] Art. 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

[10] Comité de Derechos Humanos, Observación General no. 21 Trato humano de las personas privadas de !a libertad, párr. 3.

[11] Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Neira Alegría y otros vs. Perú, Sentencia de 29 de enero de 1995, Serie C No. 20, párr. 60.

[12] Cfr. Art. XXV de la Declaración Americana de los derechos y deberes del hombre y art. 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

deberán ser tratadas humanamente, con irrestricto respeto a su dignidad, derechos y garantías fundamentales. Dicha garantía se encuentra salvaguardada también en el Sistema universal, a través del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que consagra de manera expresa en su artículo 10.1 el principio de trato humanos como eje fundamental de las normas aplicables a las personas privadas de su libertad.

11. De lo anterior, podemos advertir que, la privación de la libertad tiene como único objetivo reeducar y reinsertar socialmente a aquellas personas que han cometido un delito. Por lo cual, el Estado debe cumplir una serie de obligaciones relacionadas con su efectiva protección, a fin de que se cumplan dichos objetivos, sin que se vulneren los demás derechos humanos que éstas poseen. Sobre todo, aquellos relacionados con la salvaguarda de su vida e integridad. Por lo cual, éste tiene la obligación de protegerlos contra actos de violencia provenientes tanto de sus propios servidores, como de las demás personas privadas de su libertad.

12. La Comisión Interamericana se ha pronunciado sobre la necesidad de que los Estados ejerzan un control efectivo de los centros penitenciarios, a fin de garantizar en todo momento la seguridad de las y los internos, sus familiares y de los propios trabajadores que ahí laboran. Pues, cuando el estado deja de tener un efectivo control sobre éstos, se generan situaciones que ponen en riesgo no sólo la integridad, sino la propia vida de las personas que se encuentran privadas de su libertad. Contraviniéndose así una de las principales obligaciones en materia de derechos humanos: garantizarlos. Asimismo, se traduce en la imposibilidad de que las penas privativas cumplan con su objetivo de reeducación y reinserción social.

13. De manera específica, la Comisión Interamericana ha señalado que la violencia carcelaria es uno de los problemas más graves que enfrentan los sistemas penitenciarios de América Latina, y comprende tanto las agresiones de los agentes del Estado contra las personas privadas de la libertad, como los actos de violencia entre internos o de éstos contra los agentes del estado o terceras personas.[13] Situación que sólo pueden ser prevenidas a través de acciones concretas que, por un lado, corrijan las deficiencias que permiten el rearme de la población penitenciara y por el otro, permitan proveer los centros penitenciarios de personal capacitado y en número suficiente para asegurar el adecuado y efectivo control.

14. Así, el Estado tiene la obligación de salvaguardar los derechos de las personas privadas de su libertad, sin perjuicio de las restricciones inevitables asociadas a las condiciones de reclusión; pues, al encontrarse éstas bajo su resguardo, no hay ni puede haber ninguna razón para que éste se sustraiga de su deber perentorio de salvaguardar la vida e integridad de las personas que se hallan sujetas a su control y que carecen por sí mismas de capacidad efectiva de autodeterminación y defensa.

15. En el Sistema Interamericano, el derecho a la integridad personal se encuentra reconocido en los artículos I, XXV y XXVI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en el artículo 5 de la Convención Americana sobre los derechos humanos, al establecerse que toda persona tiene derecho a que se le respete su integridad física, psíquica y moral. Asimismo, se señala de manera específica que, toda persona que sea privada de su libertad gozará de un tratamiento humano durante dicha privación. La protección de este derecho es tal que, la Convención Americana establece la inderogabilidad de este derecho en caso de guerra, de peligro público o de otras emergencias que amenacen la independencia o seguridad del Estado.[14]

16. Así, podemos advertir que, en el Sistema Interamericano, del cual forma parte nuestro país, no es posible suspender el goce del derecho a la integridad personal, independientemente de sus circunstancias particulares. En este sentido, en los Principios y buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, se estableció la obligación del Estado consistente en proteger a éstas contra todo tipo de

---

[13] Comisión Interamericana de Derechos Humanos supra nota 1, pág. 38.

[14] Art. 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

amenazas, actos o conductas que tengan como finalidad anular la personalidad o disminuir la capacidad física o mental de la persona.[15] Situación que cobra especial relevancia tratándose de personas privadas de su libertad, pues su resguardo y control se encuentra completamente bajo el Estado; lo que obliga a éste a adoptar medidas concretas que garanticen de manera efectiva el ejercicio pleno de este derecho.

17. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 1°, párrafos, primero y tercero, establecen la obligación del Estado garante, respecto de la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos, cuando señala que "todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece."[16] Por lo que [t]odas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.[17]

18. Y en particular, por lo que hace a las personas privadas de su libertad, el artículo 18, párrafo segundo de la Constitución Federal, establece que "[e]l sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley."[18]En esas circunstancias, "el Estado es el garante de la seguridad de quienes se encuentren bajo su custodia en los centros penitenciarios del país."[19]

19. De manera coincidente, a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales, la Ley Nacional de Ejecución Penal, establece que todas las personas privadas de su libertad, gozarán de todos los derechos previstos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, según lo dispone el artículo 9 del ordenamiento legal invocado, cuando señala que "[l]as personas privadas de su libertad en un Centro Penitenciario, durante la ejecución de la prisión preventiva o las sanciones penales impuestas, gozarán de todos los derechos previstos por la Constitución y los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, siempre y cuando estos no hubieren sido restringidos por la resolución o la sentencia, o su ejercicio fuese incompatible con el objeto de éstas. Para los efectos del párrafo anterior, se garantizarán, de manera enunciativa y no limitativa,…"[20] que "[t]oda persona privada de la libertad tiene derecho a que se garantice su integridad moral, física, sexual y psicológica;"[21]

20. En ese contexto, la autoridad penitenciaria, como representante del Estado en los centros de reclusión y detención, tiene a su cargo la administración y operación del Sistema Penitenciario, basada en el respeto a los derechos humanos, supervisando que en las instalaciones de los centros, se mantenga la seguridad, tranquilidad e integridad de las personas privadas de su libertad, según lo dispone el artículo 14, 15 fracción I, 19 fracción II, 20 fracciones V y VII de la Ley Nacional vigente, cuando señala, que "[l]a Autoridad Penitenciaria organizará la administración y operación del Sistema Penitenciario sobre la base del respeto a los derechos humanos, el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte, como medios para procurar la reinserción de la persona sentenciada a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, y supervisará las instalaciones de los Centros Penitenciarios para mantener la seguridad, tranquilidad e

---

[15] Principio 1 de Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de la Libertad en las Américas.

[16] Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150917.pdf, fecha de consulta 28 de diciembre de 2020.

[17] Ídem.

[18] Ídem.

[19] CNDH Recomendación 04/2016 de fecha 25 de febrero de 2017, párr. 29.

[20] Ley Nacional de Ejecución Penal, http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LNEP.pdf, fecha de consulta 28 de junio de 2021.

[21] Ídem.

integridad, de las personas privadas de la libertad, del personal y de los visitantes, ejerciendo las medidas y acciones pertinentes para el buen funcionamiento de éstas."[22]

21. Y una de sus funciones básicas será "[g]arantizar el respeto a los derechos humanos de todas las personas que se encuentren sujetas al régimen de custodia y vigilancia en un Centro Penitenciario;"[23]. Por lo que la custodia penitenciaria será una atribución de la Autoridad Penitenciaria consistente en: "[s]alvaguardar la vida, la integridad, la seguridad y los derechos de las personas privadas de la libertad, visitantes y personal adscrito a los Centros Penitenciarios y las demás instalaciones que determinen las disposiciones aplicables; así como hacer cumplir su normatividad;"[24]. Además de [p]reservar el orden y tranquilidad en el interior de los Centros, evitando cualquier incidente o contingencia que ponga en riesgo la integridad física de las personas privadas de la libertad, visitas y personal de los mismos;"; "[s]alvaguardar la integridad de las personas y bienes en los Centros, así como garantizar, mantener y restablecer el orden y la paz en los mismos, utilizando para ello los protocolos aplicables, con apoyo en las herramientas, mecanismos y equipo necesarios disponibles para el cumplimiento de sus atribuciones; "[25]

22. El presente caso de estudio, dio inicio de manera oficiosa, como resultado de las notas periodísticas publicadas en fechas 4 y 5 de abril de 2017, en los medios comunicación, Meganoticias TVC, Gala tv Zacatecas, Mirador, Imagen, Página 24, La Jornada Zacatecas, El Sol de Zacatecas y AccesoZac, con los títulos "Investigarán presunto abuso de derechos humanos en cárcel de Zacatecas, IMÁGENES DE REOS DESNUDOS SÍ SON DEL CERERESO, PERO NO DE LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN: SSP", COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y JUSTICIA SIN QUEJA POR VIOLENCIA A REOS, Investigarán presuntos actos de tortura al interior del Cereso", "Vejaciones no fueron en esta administración: Froylán", Internos del Cereso Denuncian Torturas y Violaciones a sus Derechos Humanos, Denuncian reos de Cieneguillas abusos: CDHEZ investiga"; en los que se evidencian imágenes de personas privadas de su libertad, mientras tenía verificativo un operativo de revisión, en el Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas.

23. En ese sentido, se realizaron entrevistas a las personas privadas de su libertad agraviadas, quienes en esencia denunciaron lo siguiente:

Persona privada de su libertad	Queja
Persona privada de su libertad	Precisó que se encontraba lavando al interior del módulo, cuando ingresaron custodios de traslados y del centro penitenciario, así como otros policías vestidos con el logotipo de estatales, quien les indicaron que se fueran a sus celdas y, posteriormente, indicarles que salieran de éstas, de uno por uno, propinándoles al momento de salir, patadas en todo su cuerpo, para luego indicarles que se desnudaran y se tiraran al piso, para después indicarles regresar a las celdas donde les vuelven a decir que se desnuden.
Persona privada de su libertad	Señaló que venía de artesanías, cuando elementos de la Estatal y de la Metropol, los golpearon diciéndoles que se desnudaran, poniéndolos boca abajo, tirados en el piso sin ropa, aproximadamente 20 o 30 minutos, haciendo hincapié que a él le dieron unos bastonazos, para después revisar sus celdas, rompiendo repisas y robando su dinero.
Persona privada de su libertad	Expuso que se encontraba en las canchas, cuando los comenzaron a bocear para que acudieran a su dormitorio, por lo que, al llegar al dormitorio verde, elementos de la Policía Estatal y de la Metropol, les indicaron que se desnudaran, que se tiraran al piso del patio, tomándoles lista y después, revisaron las celdas, todo esto, por espacio de 20 minutos, para después, indicarles que regresaran a sus celdas.
Persona privada de su libertad	Declaró que se encontraba al interior de su celda, cuando llegaron alrededor de 30 elementos de la Policía Estatal Preventiva, mientras 3 oficiales encapuchados llegaron a su celda, localizada en la segunda planta del módulo, los cuales, le indicaron que bajara, observando al bajar por las escaleras que se encontraban dos filas de policías, aproximadamente 10 de cada lado, por lo que al pasar junto a ellos, estos le propinaron golpes con los toletes, golpeándole el hombro izquierdo y el muslo derecho. Y al llegar a la planta baja, le indicaron que se tirara al piso, sin embargo, después de dos minutos, uno de los oficiales le indicó que se quitara la ropa, pero como no quería, éste le propinó un golpe con el tolete, accediendo a quitarse la ropa, precisando que cuando él bajó, sus compañeros del dormitorio, ya se encontraban tirados en el piso desnudos. Y después de una

[22] Ídem.
[23] Ídem.
[24] Ídem.
[25] Ídem.

	hora, les ordenaron que regresaran a sus celdas, donde permanecieron 3 días encerrados.
Persona privada de su libertad	Refirió que, el día que ocurrieron los hechos, venía de su trabajo en la huerta, cuando observó como internos corrían para ingresar a sus celdas, porque se acercaban elementos de la Policía Estatal Preventiva y de la Policía Metropolitana, con equipo anti motín. Para lo cual, los custodios cerraron el módulo durante 5 minutos y después, ingresaron los elementos policiacos, quienes, al entrar al módulo, golpeaban a los internos que se encontraban en el camino, sometiéndolos. Refiriendo que, él se encontraba en su celda, cuando los policías lo hicieron que se hincara y, posteriormente, otros le indicaron que se quitara la ropa. Precisando que, cuando se quitaba la ropa le propinaban toletazos por las costillas y le pateaban las piernas. Para luego ponerlos boca abajo en el piso, con las manos en la nuca y una vez en el piso, los elementos pasaban y le propinaban patadas y toletazos.
Persona privada de su libertad	Manifestó que él habita el área de las personas adultas mayores y que las revisiones por parte de los Policías Estatales Preventivos, se han realizado de esa forma, señalando que en el mes de noviembre o diciembre de 2016, también les ordenaron desnudarse y permanecer en cuclillas, evitando agredirlos físicamente.
Persona privada de su libertad	Señaló que el día de los hechos, se encontraba en la celda 5 del módulo verde piteando un cinturón, cuando llegaron elementos de la Policía Estatal Preventiva, quienes les ordenaron salir de ésta, los cuales lo golpearon, dándole un toletazo en la cabeza, además de varios golpes con la mano empuñada y una patada a la altura de las costillas, del lado derecho. Asimismo, le indicaron que se desnudara y se acostara boca abajo en el patio, lugar donde se arrastró hasta donde se encuentran los nichos de las imágenes religiosas, permaneciendo aproximadamente dos horas. Para luego, indicarle regresara a su celda, donde, al realizar revisión a ésta, le indicaron que de nueva cuenta se quitara la ropa. Haciendo hincapié que, la patada en las costillas, le fue propinada por un policía penitenciario.
Persona privada de su libertad	Declaró que, el día que ocurrieron los hechos, alrededor de las 10 de la mañana, los bocearon para que, todos los internos pasaran al frente de su dormitorio para la lista de control, así que al llegar al módulo verde observó que se encontraba el Jefe de Seguridad, Policías Penitenciarios del centro y del grupo de traslados, así como elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, quienes vestían de civiles, portando únicamente chaleco táctico. Después, el jefe de seguridad y el grupo de traslados, con palabras altisonantes, les ordenaron se introdujeran al dormitorio y a sus respectivas celdas, donde los encerraron, hasta que hicieron acto de presencia los elementos de la Policía Estatal Preventiva, los cuales, comenzaron a abrir las celdas y los sacaban a golpes, precisando el entrevistado que a él lo sacaron a patadas entre tres elementos, propinándole golpes en todo el cuerpo, y en las escalera lo empujaron provocando que cayera al piso, rodando hasta el pasillo del dormitorio. Indicándole que se pusiera boca abajo y las manos en la cabeza. Por lo que encontrándose sometido, le impactaron tres patadas en el área de las costillas. Después lo trasladaron al otro extremo del dormitorio, donde les ordenaron que se quitaran la ropa y, estando desnudo lo patearon en las costillas y le dieron toletazos en las nalgas. Y, posteriormente, permaneció encerrados por tres días.
Persona privada de su libertad	Expuso que, el día que ocurrieron los hechos, alrededor de medio día, se encontraba realizando trabajos de artesanía, cuando observó elementos policiacos con chalecos de Policía Estatal que se esparcieron por el dormitorio verde de procesados, motivo por el cual, él se dirigió a su celda, sin embargo, uno de los oficiales lo sacó a estrujones de su celda, tirándolo al suelo. Después, le cuestionaban donde tenía los cuchillos y al resperles que no tenía nada, en ese instante le taparon el rostro con su misma camisa, juntándolos, acostados, con otros compañeros internos, a quienes les preguntaban sobre los nombres de internos de determinadas celdas. Y al no responder porque no sabían, le propinaban golpes en diferentes partes del cuerpo con sus toletes, además de patadas en estómago, piernas, ordenándoles además que se quitaran la ropa, por lo que, una vez desnudos, los hicieron caminar hacia el otro patio del dormitorio y al pasar frente a la fila formada por los policías, estos los golpeaban con los toletes. Y en el otro patio, les ordenaron que se pusieran boca abajo, encontrándose desnudos y quien se moviera, lo golpeaban con los toletes. Después, les indicaron que corrieran a sus celdas, y encontrándose en el interior de éstas, los volvían a revisar. Señalando que, como resultado de la agresión física, le dejaron lesiones en las nalgas y la espalda, además de dejarlo encerrado desde el martes de la revisión hasta el día sábado de la misma semana, sin recibir atención médica por las lesiones que le fueron inferidas.
Persona privada de su libertad	Expresó que, cuando sucedieron los hechos, no se encontraba en el dormitorio verde, pero se enteró por comentarios de un amigo, de lo sucedido. Además, señala que, en el mes de marzo del mismo año, se realizó otra revisión y en esa ocasión también les indicaron que dejara su ropa a excepción del calzón.
Persona privada de su libertad	Precisó que, el día de los hechos, ingresaron al dormitorio, varios compañeros corriendo y al ingresar los Policías Estatales Preventivos, todos corrieron a sus celdas. Sitio donde los policías, fueron indicándoles que salieran al patio, propinándoles un golpe en la cabeza cuando, por lo que, al llegar al patio, un policía le indicó que se tirara al suelo y se quitaran la camisa y los pantalones hasta los tobillos, mientras que otro, les ordenó que se quitaran todo, zapatos, calzones. Y si no se quitaban la ropa rápido les propinaban golpes con el tolete. Luego, una vez tirados en el suelo, les pegaban con los escudos. Después les indicaron que se fueran a sus celdas y ahí, los volvieron a revisar. Después, permanecieron encerrados en sus propias celdas sin permitirles salir a preparar

	sus alimentos.
Persona privada de su libertad	Argumentó que, los hechos ocurrieron el día que habían intentado lastimar a […], a quien apodaban el tres animales, ya que posterior al ataque, los comenzaron a bocear para que se dirigieran a los dormitorios, ya que él se encontraba laborando en el puesto de comida. Luego, cuando llegó al dormitorio, observó que los elementos de la Policía Estatal Preventiva ya tenían a todos tirados en el suelo, desnudos y boca abajo. Por lo que al verlo, le dijeron que se desnudara y le propinaron goles con el tolete, inclusive, por lo frío del suelo, puso su camiseta pero se la quitaron. Y posterior a ello, consideran que parecían gusanos porque se tenían que arrastrar tirados en el piso. Después que pasaron lista, los policías estatales revisaron sus celdas y los pasaron desnudos a éstas, pasando lista de nueva cuenta, para dejarlos encerrados entre cuatro o cinco días. Asimismo, precisa que el viernes de esa semana, acudió con ellos el director del centro penitenciario y les dijo que, no se metieran en problemas por unos pesos que les prometían para hacer cosas ilícitas. Concluye el interno que, a él le preguntaban quien vendía la droga, propinándole zapes en la cabeza y golpes en las pantorrillas.
Persona privada de su libertad	Profirió que, cuando se encontraba piteando un cinto, llegaron los elementos de policía estatal y los encerraros en las celdas y después, los sacaron de éstas, golpeándolos en la espalda con el tolete y diciéndoles que se quitaran la ropa, lo cual hicieron. Además de hacerlos que se arrastraran en el piso, desnudos, boca abajo, por el piso del patio, donde se encontraban los nichos de la virgen y de san judas. Todo esto, por espacio de una hora, precisando que a él, le pegaron con el tolete en la espalda y en un codo.
Persona privada de su libertad	Señaló que, ese día entraron al centro policías estatales y de la metropol, y comenzaron a bocear a todos para que se dirigieran al dormitorio que les corresponde, sitio donde al entrar, observaron que se encontraban los internos del dormitorio verde tirados en el suelo desnudos, boca abajo y con las manos en la cabeza, aclarando que a él no lo golpearon. Por lo que, al concluir la revisión, le indicaron que se fuera a su celda donde permanecieron encerrados
Persona privada de su libertad	Señala que se encontraba en el área de cocina, del dormitorio verde de procesados, cuando observó que elementos de la Policía Estatal Preventiva y de la Policía Metropolitana, golpeando y desnudando a muchos compañeros del mismo dormitorio. Motivo por el cual, bajó, debido a que la cocina se encuentra en la planta alta, y al ir descendiendo por la escalera, le propinaron un golpe con tolete y le indicaron que se desnudara y, posteriormente, lo tuvieron desnudos en el patio, boca abajo, por espacio de una hora y media. Después, lo pasaron a su celda, donde los policías estatales, realizaron una revisión de celda por celda, causándole daños a una pantalla de plasma que le había regalado su mamá, además de sustraerle la cantidad de $500.00 (QUIENIENTOS PESOS 00/100 M.N.). Y posteriormente, permaneciendo encerrados por una semana.
Persona privada de su libertad	Manifestó que, cuando ocurrieron los hechos, se encontraba al interior de su celda, en el módulo verde de procesados, cuando a las doce del día, pudo apreciar como varios de sus compañeros ingresaban corriendo al módulo, al igual que internos de otros módulos. Momento en el cual, los custodios del centro cerraron las puertas del dormitorio y les indicaron que permanecieran en sus saldos. Luego, ingresaron elementos de la Policía Estatal Preventiva y de la Policía Metropolitana y les indicaron que salieran de las celdas, que se hincaran y después a él lo golpearon propinándole una patada en la costilla derecha, además de un toletazo, mientras revisaban a su compañero y también su celda. Después lo bajaron al patio, y al ir por las escalera, un policía estatal le propinó una patada en la espalda provocando que cayera en el descanso de las escalera. Una vez en el patio, le realizaron una revisión corporal y después decirle que se acostaran en el piso y se desnudaran. Para esto, los policías estatales les ordenaron que se trasladaran al otro extremo del módulo, además de que, estando en el piso, pasaban por encima de ellos, pisándole la espalda, piernas y pies. Y después de eso, permanecieron encerrados en sus celdas durante tres días.
Persona privada de su libertad	Refirió que, derivado de una riña ocurrida entre el pasillo que divide al módulo verde del amarillo, donde resultó lesionada por objeto punzo cortante una persona privada de su libertad, fue que, los policías estatales que ingresaron al módulo verde con equipo de antimotines, así como policías penitenciarios, le indicaron que cerrara los refrigerados donde tiene el refresco y se dirigiera a su celda. Y una vez que se encontraban todos en sus respectivas celda, los iban sacando de a uno por uno, y como los iban sacando los golpeaban con los toletes y continuaban haciéndolo para que se tiraran al piso, esparciéndolos en los dos patios del módulo además de indicarles que se quitaran la ropa, señalando que como no se la podía quitar, le propinaron cuatro toletazos en la costilla, espalda y en la nuca. Después los comenzaron a ingresar a las celdas con aventones, patadas y desnudos. Además de quitarle la cantidad de $500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), producto de la venta de los refrescos, galletas, Sabritas, dulces, que ahí vende. Luego, los dejaron encerrados en sus respectivas celdas desde el marte de la revisión hasta el viernes.
Persona privada de su libertad	Declaró que, después de su trabajo en la huerta y regresar al módulo verde de procesados, observó que en su interior, se encontraban elementos de la Policía Estatal Preventiva, quienes le indicaron que se desnudara y se acostara en el piso, lugar en el que, algunos policías se burlaban de ellos, diciendo que estaban muy pobres porque no tenían nalgas. Asimismo, expresó que, a él no le pegaron, pero sí observó que a otros compañeros sí los agredieron físicamente. De igual manera, comentó que permaneció, alrededor de media hora, hasta que les indicaron que regresaran a sus celdas. Y, posteriormente, los policías realizaron revisión en las celdas indicándoles de nueva cuenta que se quitara la ropa,

	además de sustraerle la cantidad de $250.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.) de la venta de tortillas que realiza.
Persona privada de su libertad	Señaló que, ese día, se encontraba jugando en el rebote y al dirigirse al módulo verde de procesados, observó al exterior a un policía estatal, por lo que, al entrar, observó que sus compañeros se encontraban desnudos, tirados en el suelo del patio. Luego, a él lo llevaron hacia el área donde se encuentran unos nichos de imágenes religiosas, donde le ordenaron que también se desnudara, después que se levantara con la cabeza agachada y posteriormente, se acotara en el patio con las manos en la nuca. Precisa que, en una ocasión lo golpearon con un bastón retráctil en el hombro izquierdo. Enseguida, les ordenaron retirarse a sus celdas desnudos, donde se vistieron, pero después, los policías llegaron de nueva cuenta y les ordenaron que se desnudaran para realizar la revisión.
Persona privada de su libertad	Manifestó que el día que se suscitaron los hechos se encontraba jugando rebote en la cancha y se hizo un pleito, motivo por el cual, fueron boceados para que se concentraran en sus dormitorios. Y como fue de los últimos que llegó al dormitorio, pudo observar que ya se encontraban sus compañeros desnudos tirados en el piso, y fue cuando a él, le indicaron que también se desnudara además de propinarle bastonazos en su cuerpo. Luego, los policías estatales les ordenaron que dirigieran en sus celdas, donde permanecieron encerrados. Asimismo, señala que, no es la única vez que los policías estatales les indican que se desnuden, sino que en otras revisiones también los hacen que se hinquen.
Persona privada de su libertad	Expiso que, al regresar al módulo verde de procesados donde se encuentra recluido, observó que se encontraban elementos de la policía estatal preventiva, percatándose que al interior se encontraban sus compañeros tirados en el suelo desnudos boca abajo. Luego, lo llevaron a golpes donde se encontraban sus compañeros y le indicaron que se desnudara, pero como no se podía quitar las agujetas de sus zapatos le dieron un golpe en la columna vertebral y lo tumbaron al piso. Después pasaron lista y les indicaron que corrieran hacia sus celdas, propinándoles golpes cuando corrían y, una vez en sus celdas, de nueva cuenta los sacaron para revisarla.
Persona privada de su libertad	Declaró que, es el encargado de la marranera en la carpintería, lugar hasta donde fueron elementos de la policía estatal para decirles que se fuera a su dormitorio, caminando con las manos en la nuca. Pero al llegar a la entrada del módulo, observó que sus compañeros se encontraban desnudos boca abajo. Después, cuando lo iban a golpear junto con otro compañero, uno de los policías estatales dijo que ellos estaban trabajando, motivo por el cual, ya no los agredieron físicamente.
Persona privada de su libertad	Refirió que, en esa ocasión, los policías les indicaron que se fueran a las celdas y después, los fueron sacando de cada una de las celdas y después decirles que se desnudaran, propinándoles para ello golpes con los toletes, inclusive, señala que lo golpearon en su pierna izquierda, la cual, tenía lesionado por haber jugado futbol.
Persona privada de su libertad	Expuso que, el día en que ocurrieron los hechos, como a las cinco de la tarde, se encontraba trabajando en los baños de visita de población, cuando llegaron dos policías estatales encapuchados y le indicaron que se fuera a su dormitorio, el cual, es el verde de procesados, donde, al ingresar, uno de los policías estatales lo aventó y le dije que se quitara la ropa, por lo que se tuvo que desnudar, observando que en el patio, ya se encontraban sus compañeros tirados en el piso desnudos, y los golpeaban con patadas y toletazos. En ese momento, cuando le indicaron que se tirara en el piso y al hacerlo le propinaron dos patadas en la costilla derecha, teniéndolo en esa posición alrededor de media hora y después, conducirlo a su celda, donde le sustrajeron parte del trabajo que realiza y lo mantuvieron encerrado por tres días.
Persona privada de su libertad	Manifestó que en ese tiempo en que ocurrieron los hechos se encontraba recluido en el módulo azul, pero de sentenciados y la información de lo ocurrido fue por comentarios.
Persona privada de su libertad	Señaló que se encuentra recluido en el dormitorio amarillo, pero ese día, se encontraba afuera del dormitorio verde, cuando observó que los policías penitenciarios metieron a las personas que estaban agrediendo a otro interno del módulo azul, al dormitorio verde, donde, también a él lo introdujeron. Llegando entonces alrededor de treinta policías entre estatales, metropolitanos y gadpe. Pues los metieron a las celdas, y posteriormente, los sacaron a toletazos, y le ordenaron que se desnudara y se pusiera con el pecho en el piso. Fue entonces que le preguntaban sobre, qué internos viven en ciertas celdas y al explicarles que él era de otro dormitorio, y encontrándose desnudo boca abajo, le pusieron el tolete por el ano y le expresaron que si no les decía se lo introducirían.
Persona privada de su libertad	Declaró que, se encontraba cocinando cuando entraron seis u ocho policías estatales junto con policías penitenciarios, quienes les ordenaron que se dirigieran a sus celdas. Después, los policías fueron a las celdas y los sacaron, refiriendo que al salir, les pegaban con los toletes en la espalda, además, una mujer policía le pataleó las costillas, indicándole además que se tirara al suelo y que se quitara la ropa, pero como no podía hacerlo tirado boca abajo en el piso, fue que lo agredían verbalmente con palabras altisonantes, permaneciendo así, entre media o una hora.
Persona privada de su libertad	Expresó que, él ha estado recluido en los módulos amarillo, rojo y azul, donde el día que ocurrieron los hechos, se suscitó una riña, por lo que, los encerraron en sus celdas, para después, ser sacados de éstas por elementos de la Policía Estatal Preventiva, quienes les ordenaran que se quitaran la ropa, propinándoles golpes en todo el cuerpo con los toletes.
Persona privada de su libertad	Manifestó que, es coordinador del módulo tres, color verde de procesados y, que el día que ocurrieron los hechos los policías estatales los desnudaron, golpearon y

	ofendieron verbal y psicológicamente. Explicando que tal vez lo sucedido, obedeció a que, se suscitó una riña en el módulo 1, color azul de procesados y, como consecuencia de ello, los policías estatales acudieron a agredirlos físicamente. Inclusive, señala que, al encontrarse en las áreas verdes del módulo, los policías penitenciarios le señalaron que se metieran al dormitorio, sitio donde estaba todo normal en las mesas y los patios, cuando a los cinco minutos, llegó la policía estatal, quienes con gritos les indicaron que se metieran a sus celdas, para después pasar a cada celda, sacarlos, y pegarle en las costillas con el tolete, además de decirles que se tiren al suelo y se desnuden, pasando sobre ellos con la botas. Después les dicen que se pasen al otro patio, donde desnudos, les indican que se arrastren hasta el lado de la barda. Y después, los ingresaron a sus celdas y a los cinco minutos los vuelven a sacar para revisar éstas y, finalmente, dejarlos incomunicados por tres días.
Persona privada de su libertad	Declaró que, el día de los hechos se encontraba en segregación y que, desde ahí, alcanzó a ver que sus compañeros estaban desnudos, boca abajo.
Persona privada de su libertad	Señaló que el día en que ocurrieron los hechos, él se encontraba en el área conyugal, motivo por el cual no pudo presenciar lo sucedido.
Persona privada de su libertad	Comentó que se encontraba en la escuela estudiando, cuando los comenzaron a vocear para acudir a sus celdas y al lapso de cuarenta segundos llegó la policía estatal y les dice que se salgan y se quiten la ropa inmediatamente, por lo que, al encontrarse desnudos, los policías agredieron a varios de los internos con los toletes, permaneciendo sin ropa alrededor de cuatro horas, acostados boca abajo. Después de la revisión permanecieron cinco días, hasta que el director del centro penitenciario y el Comandante Mascorro, les comunicaron que estarían encerrados quince días.
Persona privada de su libertad	Señaló que se encontraba realizando deporte cuando los bocearon a todos para que se incorporaran a sus dormitorios, así que, al dirigirse al dormitorio cuatro de procesados, al entrar, los policías estatales les indicaron que se desnudaran totalmente, además de golpearlo con el tolete en la espalda baja. Después lo pasaron a la banqueta donde le ordenaron que se recostara boca abajo, todo ello, con palabras altisonantes, además de advertirles que quien se moviera recibiría golpes. Precisando que permanecieron alrededor de una hora, hasta que les indicaron que se fueron a sus celdas, donde permanecieron encerrados desde el martes de la revisión hasta el sábado.
Persona privada de su libertad	Precisó que el día en que ocurrieron los hechos, se encontraba afuera del dormitorio cuatro de procesados, cuando observó que, al momento que a uno de los internos del módulo azul lo llevaban los custodios, a control, otros internos se los quitaron, pero finalmente, se lo llevaron a control, por lo que, veinte minutos después, ingresaron elementos de la policía estatal, quienes les indicaron que ingresaran a sus celdas. Y una vez en las celdas, les ordenaron que salieran de uno por uno, y que se dirigieran al fondo del dormitorio para que no se vieran en las cámaras, y les ordenaron que se desnudaran totalmente. Y después de eso, se revisaron sus celdas y ellos permanecieron encerrados en sus respectivas celdas por algunos días.
Persona privada de su libertad	Denunció que, se encontraba en su celda cuando llegaron policías estatales y lo sacaron de su celda donde vende dulces y mientras sacaban a los demás compañeros de él, les decían que se fueron desnudando, mientras que, a él, una vez que se encontraba en el suelo, fue cuando le ordenaron que se desnudara, precisando que quien se moviera le daban golpes con los toletes. Aclarando que a él, no le hicieron preguntas, pero si lo tuvieron alrededor de dos horas y media y, después, permaneció entre tres o cuatro días encerrado en su celda.

24. Como se puede observar, de las entrevistas realizadas por personal de este Organismo, a las personas privadas de la libertad relacionadas con los hechos, en el Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas, se desprende que, el día 10 de enero de 2021, Policías Penitenciarios del centro de reclusión, comenzaron a convocar a los internos, para que se concentraran en sus respectivos módulos, como resultado de un hecho violento ocurrido en el módulo azul de procesados.

25. Señalando que el llamado, comenzó a realizarse mediante boceo, tal y como lo hicieron del conocimiento algunos los internos, en sus respectivos testimonios vertidos ante personal de esta Comisión. Para después, indicarles que se alojaran en sus respectivas celdas, en particular, de aquellos que habitan el dormitorio color verde, del área de procesados. Sitio donde, los elementos de Policía Estatal Preventiva, acompañados de elementos de la Policía Metropolitana, con el apoyo de los elementos de Policía Penitenciara adscritos al centro penitenciario y Policías Penitenciarios encargados de los traslados, realizaron una revisión en el módulo, donde, como parte del operativo de revisión, agredieron físicamente a las personas privadas de su libertad, obligándolos a desnudarse, acostarse boca abajo en el patio, permanecer en esa posición por un espacio de tiempo de una hora y después, recluirlos en sus respectivas celdas, donde permanecieron encerrados durante tres días, según lo expresaron algunas personas privadas de su libertad.

26. Sobre el particular, el **GRAL. DE BRIGADA D.E.M. RET. FROYLÁN CARLOS CRUZ**, otrora Secretario de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas, en su respectivo informe de autoridad, se concretó en precisar que la intervención de los elementos de la Policía Estatal Preventiva, el 10 de enero de 2017, obedeció al apoyo solicitado por el Comandante de Sección **LUIS GERARDO MELCHOR CEPEDA**, respecto de una riña suscitada entre setenta u ochenta personas al interior del Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas, señalando que al ingreso de los elementos policiacos, ya se había controlado la situación, sin embargo, se realizó una revisión en los dormitorios 2, 3 y 4 del área de procesados, en virtud a que el interno […], resultó lesionado con heridas punzo cortantes en diversas partes del cuerpo, por lo que se hizo necesario su traslado al Hospital General de Zacatecas, para su atención médica.

27. Haciendo hincapié que, la revisión se realizó para buscar objetos o sustancias cuya posesión sea prohibida, además de constatar la seguridad de las instalaciones, evitar que se pusiera en riesgo la población de los internos y el personal del centro, sus pertenencias y gobernabilidad; encontrando en el módulo 3, color verde del área de procesados, 28 envoltorios con hierba verde con características propias de la marihuana, 1 pipa, 4 celulares, 4 puntas hechizas, 1 cargador para celular y un tolete retráctil. Por lo que, la revisión ejecutada el 10 de enero de 2017, se realizó con estricto apego a la Ley Nacional de Ejecución Penal y a los protocolos de restablecimiento del orden al interior de los centros penitenciarios, en caso de emergencia y/o contingencia, con el uso proporcional de la fuerza y uso de las armas letales y no letales.

28. En adición a lo anterior, el **LIC. OSCAR GILBERTO MARTINEZ LIRA**, entonces Director del Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas, aportó como documento de prueba, el diverso informe rendido por el **C. FERNANDO CERVANTES MASCORRO**, otrora Jefe de Seguridad del centro penitenciario, donde se establece que, aproximadamente a las 12:20 horas del 10 de enero de 2017, se solicitó apoyo vía radio, en el módulo 2, color azul de procesados, donde fue víctima de un ataque a su integridad, el interno […], por parte de **CRISTIAN JOEL CÁRDENAS RAMÍREZ** y **JORGE CONTRERAS TORRES**, también personas privadas de su libertad en el centro penitenciario, donde el primero, atentó contra su integridad y a quien pudo controlar con el uso racional de la fuerza. Y en el mismo sentido, se aportaron las actas circunstanciadas levantadas a las personas privadas de su libertad […].

29. De manera complementaria, los **CC. JOSÉ ANTONIO SILVA SÁNCHEZ**, **MANUEL DE JESÚS GARAY GARCÍA**, **JUAN MANUEL RAMÍREZ CALZADA**, **CRUZ MARTÍNEZ MONTAÑEZ**, **JOSÉ MANUEL ALANÍZ FIGUEROA**, **PABLO SAMUEL VELÁZQUEZ ÁLVAREZ, SERGIO TREJO CAMPOS, JUAN FELIPE DE JESÚS JASSO CARRILLO,** elementos de la Policía Estatal Preventiva, son coincidentes en señalar que, su intervención obedeció a una llamada de apoyo realizada por el comandante de guardia del Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas, derivado de una riña que se suscitaba al interior, sin embargo, cuando hicieron acto de presencia, la situación ya estaba controlada.

30. Por su parte, los elementos de Policía Estatal Preventiva, los **CC. MANUEL DE JESÚS GARAY GARCÍA**, **JUAN MANUEL RAMÍREZ CALZADA** y **JOSÉ MANUEL ALANÍZ FIGUEROA**, señalaron que durante su intervención, en ningún momento ingresaron al dormitorio, debido a que su labor consistió en brindar seguridad en los pasillos, accesos, salida y periferia de los cañones, por lo que no tuvieron contacto con los internos, en virtud a que estos ya se encontraban en sus respectivas celdas.

31. En ese tenor, los **CC. CRUZ MARTÍNEZ MONTAÑEZ**, **JOSÉ MANUEL DUEÑAS REYES, GUSTAVO JUÁREZ ZAMBRANO, GABRIELA CARRANZA CARRILLO, GABRIEL HERNÁNDEZ ANTONIO, LEONEL MARTÍNEZ MEDELLÍN**, **MARLON EDUARDO SAUCEDO ARREDONDO, RICARDO MANUEL RAMIREZ ESPINOZA, MARCELA GONZÁLEZ PACHECO, VÍCTOR MANUEL LÓPEZ RAMÍREZ, RAYMUNDO GUILLERMO ROSSO SERRANO**, elementos policiacos de la misma corporación, expresaron no haber ingresaron al centro penitenciario, porque permanecieron en las

unidades al exterior de éste, bajo la encomienda del cuidado de las armas. Y en el mismo sentido, los elementos de la Policía Metropolitana, los **CC. BRICIO HERNÁNDEZ NAVARRO, RITO SIMENTAL CUEVAS, ARMANDO MARIANO HERNÁNDEZ** y **JUAN CARLOS PÉREZ DÁVILA**.

32. Por otro lado, los **CC. JOSÉ CRUZ RIVERA LÓPEZ**, **OSKAR SOLÍS SOTELO**, **JOSÉ IVAN ESPARZA GONZÁLEZ, J. PATROCINIO ROJAS VILLA**, **MANUEL MARÍN HERNÁNDEZ**, **J. PATROCINIO ROJAS VILLA**, **JUAN RAMÓN SOTO RÍOS**, **JESÚS IVÁN HERNÁNDEZ FAJARDO, HERIBERTO ESTEBAN NARCISO**, **JESÚS DE SANTIAGO GUERRERO**, **PAVEL SILGUERO GÓMEZ**, elementos de la Policía Estatal Preventiva, negaron categóricamente, haber participado en el operativo de revisión, realizado el 10 de enero de 2017, en el Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas, a excepción del oficial **ERNESTO SOTO SANDOVAL**, quien precisó que su intervención, consistió en trasladar a uno de los internos lesionados, con motivo del incidente, una vez que fue dado de alta, desde el hospital, al centro penitenciario.

33. De igual forma, los **CC. MANUEL DE JESÚS GONZÁLEZ OLIVA**, **GERMÁN MENDOZA DAVID**, **GABRIEL MARTÍN MARTÍNEZ**, **MANUEL ALEJANDRO CARRILLO CASTRO**, **HORACIO JARED NORIEGA RUBALCABA**, **MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ GALLEGOS**, **PABLO SOLIS HERNÁNDEZ**, **SALVADOR RAMÍREZ VIRAMONTES** y **EDUARDO ANTONIO BRIONES GARCÍA**, Policías Penitenciarios del Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas, también negaron haber participado en el operativo, debido a que no se encontraban de servicio. Mientras que, el Policía Penitenciario, el **C. ARMANDO HERRERA MARTÍNEZ**, aclaró que, sí se encontraba de servicio, pero que su participación, únicamente consistió en abrir el área médica, cuando trasladaban al interno lesionado […].

34. En ese orden, los **CC. JOSÉ ISABEL ALONSO GAYTÁN** y **RUBÉN FLORES INGUANZO,** Policía Penitenciarios del Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas, manifestaron encontrarse de servicio asignados, respectivamente, a los módulos rojo y azul de área de procesados, donde su participación consistió, principalmente en garantizar la vida de […], quien fue atacado por otras personas privadas de su libertad, motivo por el que, elementos de la Policía Estatal Preventiva y Policía Metropolitana, ingresaron al centro penitenciario a realizar una revisión en los módulos verde y amarillo de procesados.

35. Por su parte, los **CC. SERGIO TREJO CAMPOS**, **JUAN FELIPE DE JESÚS JASSO CARRILLO** y **C. ALAN BUSTAMANTE BARRÓN**, elementos de la Policía Estatal Preventiva, manifestaron no haber ingresado al dormitorio verde, sino al rojo a realizar una revisión, desconociendo lo sucedido en los demás dormitorios. Mientras que, el **C. PIOQUINTO MARTÍNEZ AHUMADA**, elemento de la Policía Metropolitana, señaló haber realizado una revisión en el dormitorio amarillo. Por otro lado, los **CC. ENRIQUE RODRÍGUEZ SOSA** y **LUIS ANTONIO CUEVAS CARLIN**, elementos de la Policía Estatal Preventiva, expresaron que, no haber ingresado al centro penitenciario, porque permanecieron, respectivamente, en el área de las personas adultas en plenitud y de personas con discapacidad.

36. En consonancia con lo anterior, los **CC. ISAEL MONSERRATH ESPINO GARCÍA** e **IVÁN ROBERTO GALVÁN LOEZA**, elementos de la Policía Estatal Preventiva, señalaron que ingresaron al centro penitenciario, pero permanecieron en la cancha de tierra, localizada frente a los dormitorios azul y rojo. Y de la misma forma, los **CC. RICARDO GONZÁLEZ REVELE** y **LUIS MANUEL SALAS ARELLANO**, elementos de la misma corporación policial, declararon, respectivamente, haber permanecido en las áreas verdes, localizadas entre los dormitorios, amarillo y azul, debido a que no contaba con equipo antimotines, y en el área de los talleres. Mientras tanto, los Policías Estatales Preventivos, los **CC. CESAR EDUARDO NESTA GABRIEL** y **JESÚS NOEL VALLEJO DÍAZ**, expusieron haber ingresado al centro penitenciario, pero haber permanecido en las canchas, dando seguridad perimetral, del mismo modo que, los elementos de la Policía Metropolitana, los **CC. MARÍA CRISTINA VALDEZ TORRES**, **JESÚS DE ÁVILA PACHECO**, **ARACELI CASTILLO TREJO** y

RAFAEL JACOBO JARAMILL quienes, de sus testimonios, señalaron haber dado seguridad, respectivamente, en las canchas, en el área perimetral y en la entrada del centro, junto con elementos de otras corporaciones.

37. En ese contexto, los **CC. CARLOS RAÚL AGUAYO HERNÁNDEZ** y **JUAN DANIEL OVALLE MARENTES**, personal adscrito al Grupo Aeromóvil Táctico de la Policía Estatal (GATDPE), reconocieron haber acudido al centro penitenciario para la atención de los hechos suscitados el 10 de enero de 2017, sin embargo, cuando llegaron, su presencia consistió en brindar seguridad perimetral desde el área de vehículos. Al igual que, los **CC. J TRINIDAD ÁVILA REYES**, **NELSON ROMÁN MEMA** y **OSVALDO VILLELA DIAZ**, Policías Estatales Preventivos, quienes precisaron no haber ingresado al centro y únicamente, dar seguridad perimetral desde el exterior.

38. Ahora bien, sobre el ingreso de personal policiaco al dormitorio color verde del área de procesados del Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas, los elementos de Policía Estatal Preventiva, los **CC. ALDO ALEJANDRO VILLA ESPINO**, **ÁNGEL REYES FÉLIX** y **RICARDO GARCÍA TRUJILLO**, señalaron haber ingresado al centro penitenciario, incluso, dirigirse al dormitorio verde, donde en el exterior, ya se encontraban entre 20 o 25 elementos de otras corporaciones policiacas, sin embargo, su intervención consistió en permanecer en el exterior del dormitorio, desconociendo lo ocurrido dentro. Y de la misma manera, el **C. HERMILO MARIANO HERNÁNDEZ**, elemento de la Policía Metropolitana, expuso haber permanecido afuera del dormitorio verde.

39. Para ello, el **C. PABLO SAMUEL VELÁZQUEZ ÁLVAREZ**, elemento de la Policía Estatal Preventiva, reconoció haber ingresado al dormitorio verde, pero no haber visto a ninguno de las personas privadas de su libertad, porque estas ya se encontraban al interior de sus celdas. Por el contrario, los **CC. NOÉ EULISES CASTRO ROJAS**, **C. J. JESÚS REYES GONZÁLEZ**, elementos de la Policía Metropolitana, señalaron que su encomienda consistió en revisar las celdas del dormitorio verde, donde no se encontraba ninguna persona privada de su libertad, y en ese sentido, el **C. JORGE HERNÁNDEZ PERCASTRE**, también elemento de la misma corporación policial, manifestó que, a él, no le correspondió ver la revisión realizada por los elementos de la Policía Estatal Preventiva. Mientras que, el **C. JAIME PADILLA RAMÍREZ**, elemento de la Policía Metropolitana, sostuvo que su participación consistió en realizar revisión corporal a los internos, en varios dormitorios, encontrando puntas, cúter y armas blancas artesanales.

40. Sin embargo, del testimonio vertido por los elementos de Policía Estatal Preventiva, el **C. ANDRÉS ROCHA RAYGOZ**, así como de Policía Metropolitana, los **CC. ROCÍO AGUILAR**, **IVÁN ANDRÉS REYES ROSAS, ENDY JONATHAN BRIONES MENCHACA**, **SANTIAGO ARTEAGA DUARTE**, **SAMUEL ALEJANDRO HERNÁNDEZ**, **ELI ABIMAEL URIBE MORENO**, **MARTÍN GUADALUPE DE LUNA GARCÍA**, **ALFREDO LORENZO GERONIMO,** en concordancia con lo declarado por el elemento de la Dirección de Seguridad Pública del Municipio de Guadalupe, Zacatecas, el **C. IVÁN ANDRÉS REYES ROSAS**, se desprende que su intervención, obedeció al apoyo que se brindó en el Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas, referente a una riña que se suscitaba al interior, pero que, cuando llegaron al centro, ya se encontraba controlada la situación por los elementos de la Policía Estatal Preventiva, haciendo hincapié que, en el módulo al que ingresaron, los internos se encontraban acostados en el piso, con postura boca abajo, formando dos filas, una frente a la otra, los cuales estaban completamente desnudos; mientras que otros, iban saliendo de sus celdas desnudos o bien, se iban integrando a las filas y se desnudaban.

41. En el mismo sentido, la **C. MADELYN GARCÍA SÁNCHEZ**, elemento de la Policía Metropolitana, señaló que cuando ingresó al centro penitenciario, observó que las personas privadas de su libertad, se encontraban en el área de comedores, acostados en línea en el piso, algunos con ropa y otros en ropa interior. Mientras que, el **C. ADRIAN TREJO VERGARA**, elemento de la misma corporación, reconoció haber ingresado al dormitorio verde para revisar las celdas, en conjunto con elementos de la Policía Estatal Preventiva, sin embargo, omitió realizar manifestación respecto a la situación en la que se encontraban las

personas privadas de su libertad, concretándose en señalar que, los elementos de Policía Estatal Preventiva, ya tenían controlada la situación y, en el mismo sentido, vertió su testimonio, el **C. LUIS ANTONIO CUEVAS CARLIN**, Policía Estatal Preventivo, Pero, contrario a ello, los **CC. ANDRÉS ROCHA RAYGOZA, LUIS GERARDO MELCHOR CEPEDA**, elementos de la misma corporación sostuvieron que, el personal de custodia penitenciaria, fueron quienes habían controlado la situación.

42. Por otro lado, los **CC. ROSAURO JARAMILLO GALVÁN, JORGE ALFREDO CORDERO JUÁREZ**, **JOSÉ ANTONIO GARCÍA LAMAS** y **EDUARDO VALENCIANA CARRILLO**, elementos de la Policía Estatal Preventiva, declararon encontrarse en el interior del centro penitenciario, pero, dando seguridad desde las torres, respectivamente, torre 1, torre 5 y torre 4.

43. De tal forma, el **C. HEDRY BENJAMÍN BENITEZ ROJAS**, Policía Penitenciario del Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas, precisó que su participación, fue dar seguridad en el dormitorio azul de procesados, derivado del ataque perpetrado sobre […], persona que se encontraba privada de su libertad.

44. Como se puede advertir, de los respectivos informes de autoridad, los testimonios de las personas privadas de su libertad y de las declaraciones de los elementos policiacos de la Policía Estatal Preventiva, Policía Metropolitana, Dirección de Seguridad Pública de Zacatecas y Policía Penitenciaria, se desprende que, el 10 de enero de 2017, se suscitó un hecho violento, consistente en una riña en el área de procesados del Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas, situación que generó la activación del botón de pánico, mediante el cual, se solicitó apoyo a las corporaciones policiales para garantizar la gobernabilidad del centro.

45. Acudiendo a la solicitud de auxilio, en primer momento, los elementos de la Policía Estatal Preventiva, quienes junto con el personal de custodia penitenciara, se encargaron de controlar la situación, procediendo a la realización de una revisión; sin embargo, en la realizada en el módulo azul de procesados, se tiene debidamente demostrado que, dicha revisión, no se apegó al protocolo de revisión de las personas privadas de su libertad, teniendo en consideración que de las declaraciones vertidas por los internos, **MANUEL DE JESÚS LORENZO MEDINA, ÁNGEL MANUEL OROZCO ROJAS, JUAN ANTONIO BERNAL VENEGAS, RAMÓN FLORES GARCÍA** y **GERARDO ROSAS ROSAS**, primeramente, fueron boceados a través de la bocina de control para que se introdujeran en su dormitorio y realizar el pase de lista, esto es, el perifoneo realizado consistía en que las personas privadas de su libertad, se concentraran en su respectivos dormitorios, donde, en un primer momento, fueron ingresados a sus celdas, para después, pasarlos al patio, indicarles que se desnudaran y se pusieran en el piso boca abajo, con mlas manos en la cabeza.

46. Afirmación que, se encuentra respaldada con el testimonio de diversas personas privadas de la libertad, personas privadas de su libertad, en el módulo verde de procesados del centro penitenciario de alusión, quienes sostienen que, durante un tiempo aproximado de veinte a una hora permanecieron en esa posición, mientras que los elementos de Policía Estatal Preventiva, Policía Metropolitana y Policía Penitenciaria, realizaban revisión en cada una de las celdas.

47. En ese contexto, esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, cuenta con los testimonios de los Policías Estatales Preventivos, los **CC. ANDRÉS ROCHA RAYGOZ** y **JAVIER CASTELLANOS NAVARRETE**, así como de los elementos de la Policía Metropolitana, los **CC. ROCÍO AGUILAR**, **IVÁN ANDRÉS REYES ROSAS, ENDY JONATHAN BRIONES MENCHACA**, **SANTIAGO ARTEAGA DUARTE**, **SAMUEL ALEJANDRO HERNÁNDEZ**, **ELI ABIMAEL URIBE MORENO**, **MARTÍN GUADALUPE DE LUNA GARCÍA**, **ALFREDO LORENZO GERONIMO** e **IVÁN ANDRÉS REYES ROSAS**, quienes son coincidentes en señalar que, su intervención obedeció al apoyo que se brindó al Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas, referente a una riña que se suscitaba al interior, pero que, cuando llegaron al centro, ya se encontraba

controlada la situación por los elementos de la Policía Estatal Preventiva, haciendo hincapié que, en el módulo al que ingresaron, los internos se encontraban acostados en el piso, con postura boca abajo, formando dos filas, una frente a la otra, los cuales estaban completamente desnudos; mientras que otros, iban saliendo de sus celdas desnudos o bien, se iban integrando a las filas y se desnudaban.

48. Esto es, del testimonio vertido por los elementos policiacos señalados en el punto precedente, se tiene debidamente demostrado que, si bien es cierto, las corporaciones policiacas acudieron en atención al reporte de una riña que se suscitaba al interior del centro penitenciario, resulta indiscutible aseverar que los elementos de la Policía Estatal Preventiva, realizaron la revisión en el módulo verde de procesados, del Centro regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas, el 10 de enero de 2017, donde, ordenaron a las personas privadas de su libertad que se desnudaran, se pusieran boca abajo, en el patio del dormitorio, formaran dos filas, mientras que otros elementos policiacos, les indicaban se desnudaran desde que salían de sus respectivas celdas.

49. Evidencia testimonial que, permite corroborar que las fotografías publicadas en los medios de circulación, “Meganoticias TVC”, “Gala tv Zacatecas”, “Mirador”, “Imagen”, “Página 24”, “La Jornada Zacatecas”, “El Sol de Zacatecas”, y “AccesoZac”, en fecha 05 de abril de 2017, son fotografías que en realidad corresponden a un operativo de revisión practicado en el Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas, el día 10 de enero de 2017, por elementos de la Policía Estatal Preventiva, donde también, participaron elementos de la Policía Metropolitana y Policías Penitenciarios, posterior a haberse reportado un hecho violento, como lo fue una riña, donde resultó lesionado […], persona que se encontraba privada de su libertad en el módulo azul, del área de procesados.

50. Es decir, se tiene completamente comprobado que, los hechos materia de la queja, acontecieron el 10 de enero de 2017, de acuerdo los partes informativos de esa misma fecha, rendidos al **TTE. COR. Y LIC. ANTONIO SOLÍS ÁLVAREZ**, otrora, Director del Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas, por los **CC. FERNANDO CERVANTES MASCORRO** y **JUAN CARLOS SÁNCHEZ ORTIZ**, quienes se desempeñaban, respectivamente, como Jefe de Seguridad y Segundo Comandante de la Primera Guardia en el centro de reclusión; y que dicha información, es confirmada con el informe de autoridad rendido a esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, por el **GRAL. DE BRIGADA D.E.M. RET. FROYLAN CARLOS CRUZ** quien, en aquel tiempo, se desempeñaba como Secretario de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas. Informe de autoridad, al que se agregó el diverso informe rendido al **GRAL. IGNACIO LÓPEZ FLORES**, entonces Director General de Prevención y Reinserción Social del Estado de Zacatecas, dentro del cual, se puede apreciar que, posterior a la atención de la riña, se practicó una revisión en los módulos de procesados del centro penitenciario.

51. En ese entendido, no existe duda para esta Institución Defensora de Derechos Humanos que, posterior a la atención de auxilio de un hecho violento, donde resultó lesionado […], otrora persona privada de su libertad en el Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas, los elementos de la Policía Estatal Preventiva, conjuntamente con elementos de la Policía Metropolitana y de la Policía Penitenciaria adscrita al centro, llevaron a cabo un operativo de revisión en los módulos localizados en el área de procesado, donde, de los testimonios vertidos por los Policías Estatales Preventivos, los **CC. ANDRÉS ROCHA RAYGOZ** y **JAVIER CASTELLANOS NAVARRETE**, así como, los elementos de la Policía Metropolitana, los **CC. ROCÍO AGUILAR**, **IVÁN ANDRÉS REYES ROSAS, ENDY JONATHAN BRIONES MENCHACA**, **SANTIAGO ARTEAGA DUARTE**, **SAMUEL ALEJANDRO HERNÁNDEZ**, **ELI ABIMAEL URIBE MORENO**, **MARTÍN GUADALUPE DE LUNA GARCÍA**, **ALFREDO LORENZO GERONIMO** e **IVÁN ANDRÉS REYES ROSAS**, se ordenó a las personas privadas de su libertad del módulo verde del área de procesados se desnudaran para llevar a cabo la revisión en el dormitorio.

52. Procedimiento que, de ninguna manera se sujeta al protocolo para la revisión de personas privadas de su libertad, aprobado para el centro penitenciario de alusión, en virtud a que éste, establece que los actos de revisión “[s]on aquellos que lleva a cabo el personal

de Custodia Penitenciaria y, en su caso, las autoridades de seguridad pública coadyuvantes"[26], las cuales "[s]e deben realizar de la manera menos intrusiva y molesta a las personas privadas de la libertad en su intimidad y posesiones, sin dañar los objetos inspeccionados".[27] Por lo que, la actuación realizada por los elementos de la Policía Estatal Preventiva y algunos elementos de la Policía Metropolitana, con la anuencia de la Policía Penitenciaria del Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas, en ningún momento se sujeto a lo previsto en las reglas 50, 51 y 52.1, de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, teniendo en consideración, primeramente que, éstas establecen que, "[l]as leyes y reglamentos que regulen los registros de reclusos y celdas serán acordes con las obligaciones derivadas del derecho internacional y tomarán en consideración las reglas y normas internacionales, teniendo en cuenta la necesidad de garantizar la seguridad en el establecimiento penitenciario. Los registros se realizarán de un modo que respete la dignidad intrínseca del ser humano y la intimidad de las personas, así como los principios de proporcionalidad, legalidad y necesidad."[28]

53. Asimismo, "[l]os registros no se utilizarán para acosar ni intimidar al recluso ni para inmiscuirse innecesariamente en su intimidad. A efectos de rendir cuentas, la administración penitenciaria dejará debida constancia de los registros que se lleven a cabo, en particular de los registros personales sin ropa, los registros de los orificios corporales y los registros de las celdas, así como de los motivos de esos registros, la identidad de quienes los llevaron a cabo y los resultados obtenidos."[29] Y especialmente, "[l]os registros invasivos, como los registros personales sin ropa y los registros de los orificios corporales, solo se efectuarán cuando sean absolutamente necesarios. Se alentará a las administraciones penitenciarias a idear y poner en práctica alternativas adecuadas a los registros invasivos. Los registros invasivos se harán en privado y por personal calificado del mismo sexo que el recluso."[30]

54. De manera concordante la Ley Nacional de Ejecución Penal, en su artículo 61, precisa que, "[t]odos los actos de revisión deben obedecer a principios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad, y realizarse bajo criterios no discriminatorios y en condiciones dignas. Los actos de revisión se llevarán a cabo de la manera menos intrusiva posible y que causen las menores molestias a las personas en su intimidad, integridad, libertad, posesiones y derechos."[31] En ese entendido, "[s]e considerarán actos de revisión personal los que se lleven a cabo en la aduana de los Centros Penitenciarios o en su interior, en las personas o en sus pertenencias. Dicha revisión se realizará mediante la exploración visual, el empleo de sensores o detectores no intrusivos, la exploración manual exterior y la revisión corporal.

55. En entendido, "[l]a revisión corporal sólo tendrá lugar de manera excepcional, cuando a partir de otro método de revisión se detecten posibles objetos o sustancias prohibidas debajo de alguna prenda de vestir y la persona revisada se niegue a mostrarla. La revisión interior sólo se realizará sobre prendas y partes corporales específicas y no comprenderá el desnudo integral ni la revisión de las cavidades vaginal y/o rectal." Por lo que, "[l]a exploración manual exterior y la revisión corporal deberán realizarse con las condiciones sanitarias adecuadas y por personal calificado del mismo sexo de la persona a quien se revise." En consecuencia, "[e]l personal que revisa actuará con conocimiento y respeto a la dignidad y derechos humanos de la persona revisada. La persona sobre quien se practique este tipo de revisión podrá solicitar la presencia de una persona de confianza o de su defensora."

56. Es decir, el hecho de haber ordenado a los reclusos del módulo verde del área de procesados del Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas, a desnudarse y tirarse al piso boca abajo, en ningún momento se sujeta a los principios de proporcionalidad, legalidad y necesidad, ya que la autoridad penitenciaria conjuntamente con

---

[26] Protocolo de Revisión de las Personas Privadas de la Libertad y/o Sitios, noviembre 2016.
[27] Ídem.
[28] Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Nelson_Mandela_Rules-S-ebook.pdf, fecha de consulta, 02 de septiembre de 2021.
[29] Ídem.
[30] Ídem.
[31] Ley Nacional de Ejecución Penal, http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LNEP_090518.pdf, fecha de consulta, 02 de septiembre de 2021.

los elementos policiacos de Seguridad Pública que participaron en la revisión o registro, justificaron en sus respectivos informes de autoridad la medida aplicada.

57. No debemos olvidar que, las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos en consonancia con la Ley Nacional de Ejecución Penal, precisan que, el registro o revisión donde sea necesario que la persona privada de su libertad se desnude para una revisión, esta deberá realizarse en privado y con personal calificado del mismo sexo, por lo que la práctica efectuada por los servidores públicos participantes en los hechos que se analizan, de ninguna manera se sujetan a las normatividades señaladas con antelación, teniendo en consideración que, el ordenamiento para que los reclusos se desnudaran, se realizó de manera colectiva, con lo cual, se aleja totalmente del derecho a la privacidad y, dicha práctica, de acuerdo a la información vertida por las autoridades involucradas, no encuentra sustento o justificación para su realización, por lo que esta Comisión, considera que la forma en que se procedió la realización del registro, fue en todo momento, invasivo a su intimidad, con el ánimo de acosarlos e intimidarlos, degradando con ello su dignidad como persona humana y, por ende, causando una vulneración a sus derechos humanos, ya que, debemos tener presente que, la dignidad humana es la base de los derechos fundamentales de toda persona.

58. En esa tesitura, el procedimiento implementado por los elementos de la Policía Estatal Preventivos y Policía Metropolitana, con anuencia de los Policía Penitenciarios adscritos al Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas, y demás personal penitenciario dependiente de la Dirección de Prevención y Reinserción Social del Estado, consistente en que, las personas privadas de su libertad del dormitorio verde del área de procesados, del centro penitenciario, consistente en obligarlos a desnudarse, tirarse al piso boca abajo y con la advertencia de agredirlos físicamente, lejos de tratarse de un procedimiento de revisión o registro apegado a la legalidad, éste se traduce en actos de menoscaban su dignidad como personas, provocando acoso e intimidación, y un alto grado de vulnerabilidad.

59. De ahí que, esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, tiene debidamente demostrado que, la autoridad penitenciaria, en conjunto con las corporaciones de Seguridad Pública coadyuvantes en la revisión, vulneraron los derechos humanos de diversas personas privadas de su libertad, atribuible a los Policías de Penitenciarios del Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas, a elementos de la Policía Estatal Preventiva y elementos de la Policía Metropolitana.

60. Esto es, los Policías Penitenciarios adscrito al centro, tuvieron a su cargo convocar a todos los reclusos a concentrarse en los dormitorios y, posteriormente, abrieron las puertas para que, los elementos de la Policía Estatal Preventiva, los sacara de éstas y ordenara que se desnudaran y se colocaran boca abajo en el piso del patio del dormitorio, omitiendo impedir que se llevara a cabo los actos materiales realizados por los elementos de la Policía Estatal Preventiva y de la Policía Metropolitana.

61. Afirmación a la que se concluya, debido a que, se puede incurrir en la vulneración a los derechos humanos, tanto por acción como por omisión, teniendo presente que, los Policías Penitenciarios y algunos de los elementos de Policía Metropolitana, vulneraron los derechos humanos de los reclusos por omisión, al permitir que, los elementos de la Policía Estatal Preventiva, realizara un procedimiento de revisión, totalmente alejado de toda normatividad aplicado a la materia.

62. De acuerdo con lo anterior, se puede apreciar que, la vigilancia y protección de la integridad y seguridad personal de los internos del Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas, fue deficiente y, consecuentemente, violatoria de los derechos humanos de la población penitenciaria, si tomamos en consideración que, el personal de seguridad y custodia, o Policías Penitenciarios adscritos al centro de reclusión, únicamente, se dedicaron a cerrar y abrir candados, para la apertura de las celdas, y olvidaron en todo momento, la premisa de brindar seguridad para garantizar las integridad de las personas privadas de su libertad, cuando permitieron que, los elementos de la Policía

Estatal Preventiva, realizara una revisión totalmente alejada a la normatividad aplicable a la materia.

63. De igual manera, para esta Comisión, como parte fundamental para garantizar la integridad y seguridad personal de las personas privadas de su libertad, que el Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas, adolece del personal suficiente para atender todas las situaciones que se suscitan en el centro penitenciario, aunado al nulo funcionamiento de las cámaras de videovigilancia que se localizan al interior de los módulos, ya que, del informe de autoridad rendido por el **LIC. OSCAR B O MARTINEZ LIRA**, en aquel tiempo Director del Centro Regional de Reinserción Varonil de Cieneguillas, Zacatecas, se informa que, únicamente, se contaba con los **CC. RUBEN FLORES INGUANZO** y **JOSE ISABEL ALONSO GAYTÁN**, Policías Penitenciarios adscritos al centro, para atender la seguridad y vigilancia penitenciara en al área de procesados.

64. Información que, concatenada con la entrevista sostenida por personal de esta Institución Defensora de Derechos Humanos, con la **LIC. MARÍA GUADALUPE ÁVILA LECHUGA**, entonces Jefa del Departamento Jurídico de la Dirección de Prevención y Reinserción Social del Estado, se desprende que, como medida para mejorar la seguridad del centro, se ha dado inicio a la contratación de personal, es decir, tal circunstancia revela la insuficiencia de personal de seguridad y custodia penitenciaria del centro, basados, particularmente, en lo establecido en la Recomendación General 30 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, donde establece que, un centro penitenciario de mediana seguridad, como lo es el de Zacatecas, se debe contar con un custodio por cada diez internos, y que, en el caso de estudio, tal circunstancias de ninguna manera se aproxima a la recomendación, debido a que, existían dos policías penitenciarios para atender a toda la población del área de procesados, donde debe hacerse hincapié que, está conformada por cuatro dormitorios, con un aproximado de más de cincuenta personas privadas de su libertad por módulo.

65. En ese orden de ideas, respecto a las cámaras de videovigilancia, del informe rendido por el **GRAL. IGNACIO LÓPEZ FLORES**, entonces Director General de Prevención y Reinserción Social del Estado, al **GRAL. BRIGADIER RET. FROYLAN CARLOS CRUZ**, Secretario de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas, en fecha 17 de abril de 2017; mismo que se agregó al informe de autoridad, que el otrora titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, rindió a este Organismo, de su contenido se desprende que, la cámara de vigilancia localizada al interior del módulo número tres, color verde, del área de procesados, fue destruida desde el 23 de enero de 2015 y, que hasta la fecha en que ocurrieron los hechos, esto es, el 10 de enero de 2017, habían transcurrido casi dos años sin haber sido reparada. Situación que, hace vislumbrar a esta Comisión que, durante ese tiempo, pudieron suscitarse eventos que vulneraron los derechos humanos de las personas privadas de su libertad, como las que en esta ocasión se evidencia, y que se encuentran recluidas en ese dormitorio, mismas que no fueron registradas por la omisión en la que ha incurrido la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

66. Debido a que, mediante oficio número CRRS/1765/201, de fecha 13 de mayo de 2016, dirigido al **LIC. GABRIEL MORALES TORRES**, entonces Director de Prevención y Reinserción Social del Estado, por el **TTE. COR. Y LIC. ANTONIO SOLÍS ÁLVAREZ**, en ese tiempo Director del Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas, donde este último, solicita el mantenimiento de las cámaras, localizadas en los dormitorios, azul y verde de sentenciados, así como, verde y amarillo de procesados. Y, a su vez, el otrora Director de Prevención y Reinserción Social del Estado, lo hace del conocimiento al **LAE. ISIDRO DE LEÓN HERNÁNDEZ**, Coordinador Administrativo de la Secretaría de Seguridad Pública, mediante oficio número 3083/2016, de fecha 17 de mayo de 2016.

67. Ya que no debemos olvidar que, las cámaras de vigilancia, además de formar parte del equipo electrónico que permite garantizar la seguridad del centro penitenciario, también, ejerce una función disuasiva para las personas privadas de su libertad y para las autoridades penitenciarias y de seguridad pública que coadyuvan en garantizar la gobernabilidad del centro. Impidiendo situaciones irreparables, brindar auxilio o tener conocimiento inmediato de

los hechos que se suscitan en el interior de las área del centro penitenciario, para que así, se informé oportunamente a los servidores públicos con facultad de decisión, para tomar las medidas pertinentes, como en el presente caso, evitar que los reclusos hayan sido objeto de un trato indigno, malos tratos y agresiones por parte de los elementos de Policía Estatal Preventiva y elementos de la Policía Metropolitana, quienes les ordenaron que se desnudaran y se acostaran boca abajo en el patio del módulo verde de procesados.

68. Es así que, podemos concluir que, la responsabilidad en las violaciones a derechos humanos de las personas privadas de su libertad, resultan atribuibles, no solo a los elementos de la Policía Penitenciaria, la Policía Estatal Preventiva y la Policía Metropolitana, sino también, al **TTE. COR. RET. ANTONIO SOLÍS ÁLVAREZ,** en ese tiempo, Director del Centro de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas, así como al **LIC. GABRIEL MORALES TORRES**, entonces Director de Prevención y Reinserción Social, por las omisiones en que incurrió el personal de seguridad y custodia penitenciara, al no garantizar una vigilancia y atención eficaz y oportuna de eventos como los ocurridos en la presente Recomendación; es decir, por no realizar las acciones preventivas y de contención necesarias para salvaguardar la integridad y seguridad de las personas privadas de su libertad al interior de dicho establecimiento penitenciario.

69. Por otra parte, respecto a la presunta agresión física de la cual fueron objeto los agraviados, al momento en que fueron sacados de su celda, para indicarles que se concentraran en el patio, se desnudaran y se acostaran boca abajo, este Organismo, no cuenta con elementos de convicción para determinar alguna alteración en el cuerpo de los internos que les haya dejado huella, debido a que, ninguna de las privadas de su libertad, en ningún momento se acercaron al área médica para ser valorados en las lesiones que les fueron provocadas por los elementos de las corporaciones policiacas, según se encuentra asentado en el acta circunstanciada, levantada con motivo de la entrevista sostenida entre personal de esta Comisión y, el personal médico del área médica del centro penitenciario.

70. De ahí que, desde el 10 de enero de 2017, fecha en que se suscitaron los hechos, y el 05 de abril de 2017, en que se dio inicio a la presente queja oficiosa, derivado de las notas periodistas publicadas en los diferentes medios de comunicación, habían transcurrido casi tres meses. Tiempo en el que, ya no fue posible detectar alguna alteración en la salud que dejara huella en el cuerpo de las personas privadas de su libertad, por haber transcurrido casi tres meses, desde que los internos, además del trato denigrante padecido por el procedimiento de revisión o registro inadecuado, se presume fueron objeto de agresiones físicas por parte de las corporaciones policiacas involucradas.

VIII. CONCLUSIONES DEL CASO.

1. Esta Comisión rechaza la vulneración de los derechos humanos de las personas en condiciones de vulnerabilidad, en el caso particular, de las personas privadas de su libertad y, por ende, repudia la actuación omisa, excesiva, abusiva e ilegal, de las autoridades penitenciaras y de Seguridad Pública, que se encuentran debidamente obligadas a sujetarse a la legalidad, procurando proteger la dignidad, la integridad y seguridad personal de las personas recluidas, así como, brindar protección y seguridad a sus personas, máxime, cuando éstas se encuentran bajo su control y resguardo, ya que con dichos actos se puede ocasionar afectaciones graves a sus derecho humanos.

2. En el caso específico, se vulneró el derecho a la dignidad, como fuente de los derechos humanos, así como el derecho a la integridad y seguridad personal, en perjuicio de diversas personas privadas de la libertad, en el Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas, por actos atribuibles a elementos de la Policía Estatal Preventiva, elementos de la Policía Metropolitana y elementos de Policía Penitenciaria adscritos al Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cienguillas, Zacatecas, así como por la Dirección de Prevención y Reinserción Social del Estado, encargado de los traslados, en virtud a no apegarse a ningún procedimiento, lineamiento o legislación nacional o internacional aplicable al respecto, acorde al Protocolo de Revisión de las Personas Privadas

de la Libertad y/o Sitios, autorizado en noviembre 2016, es decir, los servidores públicos no actuaron en términos de lo establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales en esta materia.

3. De igual forma, las autoridades señaladas como responsables, omitieron brindar protección y seguridad a las personas privadas de su libertad, resultando éstas afectadas en su dignidad y en su integridad y seguridad personal, en virtud de omitir sujetar sus actuaciones al Protocolo de Revisión de las Personas Privadas de la Libertad y/o Sitios, autorizado en noviembre 2016.

4. Por otra parte, este Organismo advierte que la Dirección de la Policía Estatal Preventiva, carece de un control efectivo que permita identificar a las y los elementos que participaron en el operativo, lo que obstaculiza poder determinar el grado de responsabilidad de cada uno de éstos. De ahí, la necesidad que, la actual administración, implemente las estrategias de control requeridas en los operativos , que permitan identificar el número de elementos que ingresan al centro penitenciario y a que corporación pertenecen, a fin de contar con información útil que esclarezca los hechos; asimismo, impulsar el cumplimiento de todos las disposiciones jurídicas vigentes y de los protocolos de actuación que los centros de reclusión requieran para garantizar la seguridad de las instalaciones, de los internos, de los visitantes y de las personas que laboran en ese lugar para prevenir con lo anterior, violaciones a derechos humanos.

5. Por su parte, los Elementos de la Policía Estatal Preventiva, incurrieron en actos lesivos a la dignidad, a la integridad física y a las pertenencias de los internos, al tirar su ropa, alimentos y objetos al piso, obligarlos a desnudarse, hacer sentadillas, hincarlos y tirarlos al piso, e interrogarlos y golpearlos vulnerando su derecho al trato digno y a la integridad personal ocasionándoles las lesiones que presentaron y que fueron descritos en las constancias médicas.

6. Asimismo, este Organismo arriba a la conclusión de que, los Policías Penitenciarios en turno, incumplieron con su obligación de salvaguardar la dignidad y la integridad y seguridad personal de la población del centro penitenciario. En primer lugar, al no impedir que se vulneraran los derechos humanos de éstos y, en segundo, al no reportar las agresiones físicas de que fueron objeto, así como no registrar éstas, ni los daños materiales que se les causaron, en el parte informativo que rindieron al Director del Centro Regional de Reinserción Social.

7. Aunado a la falta de recursos humanos y medios materiales para el debido funcionamiento del Sistema Penitenciario, como los son personal técnico, administrativo, profesional y penitenciario para cubrir todas las áreas de servicio del Centro, cámaras de vigilancia de largo alcance y buena resolución para interiores y exteriores, colocadas en lugares estratégicos para monitorear la vigilancia permanente las veinticuatro horas y poder reaccionar ante cualquier situación de peligro que acontezca al interior o exterior del referido centro de reclusión, haciéndose extensivo dicho requerimiento a los demás centro de reclusión del estado, que son carencias que tienen repercusión en la vulneración a los derechos humanos de la población penitenciaria, dado que en el caso específico, por el poco personal penitenciario existente no fue posible estar pendiente de las situaciones irregulares que acontecían en la revisión en perjuicio de los internos.

8. Esta Comisión considera apremiante la adopción de una política pública en este rubro que permita garantizar la no repetición de las violaciones a los derechos humanos de las personas que se encuentran en los centros de reclusión, de forma que se cuente con estrategias, organización y los medios adecuados, suficientes y eficaces para tutelar la vida y su integridad personal.

9. La Comisión reitera la importancia de aplicar las normas y lineamientos existentes en materia de Revisiones, Sistema Penitenciario y de Derechos Humanos, por lo cual es urgente implementar programas de capacitación hacia todo el personal Penitenciario y de la Policía Estatal Preventiva, para la aplicación puntual en su caso de dicha normatividad.

IX. REPARACIONES

1. De conformidad con lo establecido en los artículos 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 51 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, al acreditarse una violación a los derechos humanos atribuible a un servidor público estatal, la Recomendación formulada al respecto debe incluir las medidas que procedan para lograr la efectiva restitución de las personas afectadas en sus derechos.

2. Dicha reparación, de conformidad con los *Principios y Directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones",* adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 2005, las violaciones de derechos humanos deben contemplar, de forma apropiada y proporcional a la gravedad de ésta, una reparación plena y efectiva en las formas siguientes: indemnización, restitución, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición.

A) De la indemnización.

1. La indemnización es una medida compensatoria que busca reparar los perjuicios económicamente evaluables que sean consecuencia de las violaciones a derechos humanos, entre los que se incluyen: el daño físico o mental; la pérdida de oportunidades, en particular las de empleo, educación y prestaciones sociales; los daños materiales y la pérdida de ingresos, incluido el lucro cesante; los perjuicios morales; los gastos de asistencia jurídica o de expertos, medicamentos y servicios médicos, psicológicos y sociales.

2. En el caso motivo de esta Recomendación, resulta procedente el pago de una indemnización, por la afectación emocional ocasionada a las personas privadas de su libertad, derivado del trato denigrante padecido a manos del personal de la Policía Estatal Preventiva y de la Policía Metropolitana, en el operativo de fecha 10 de enero de 2017.

B) De la rehabilitación.

1. Las medidas de rehabilitación buscan reducir los padecimientos físicos y psicológicos de las víctimas, a través del otorgamiento de servicios de atención médica, psicológica, jurídica y social que éstas requieran.

2. En ese sentido, en el caso particular, este Organismo no cuenta con certificaciones médica y psicológicas, realizadas por profesionales en la salud física y mental, que permitan clasificar el grado de afectación ocasionado sobre las persona privadas de su libertad, con los hechos ocurridos durante la revisión del 10 de enero de 2017, por parte de los elementos de la Policía Estatal Preventiva, Policía Metropolitana y Policías Penitenciarios, al interior del dormitorio verde de procesados, del Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas. Por lo cual, deberá realizarse una evaluación a cada uno de los señalados como agraviados, a fin de determinar el tipo de atención médica o psicológica que cada uno requiere y, en su caso de que así lo decidan, proporcionárselas.

C) De las medidas de satisfacción.

1. Estas medidas contemplan la verificación de los hechos y la revelación de la verdad, así como aplicación de sanciones jurídicas o administrativas a los responsables de las violaciones.

2. En ese contexto, se requiere que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas, a través de su Titular en turno, proceda a ordenar al área de asuntos internos, realizar la investigación administrativa que corresponda, a fin de determinar la responsabilidad y sanciones específicas de los elementos de la Policía Estatal Preventiva,

Policía Metropolitana y Policía Penitenciaria, que incurrieron en la vulneración de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad el 10 de enero de 2017.

D) Garantías de no repetición.
1. Son aquellas que se adaptan con el fin de evitar que las víctimas vuelvan a ser objeto de violaciones a sus derechos y para contribuir a prevenir o evitar la repetición de actos de la misma naturaleza.

2. A fin de prevenir la violación de los derechos humanos aludido, dentro del presente instrumento de Recomendación, resulta indispensable que el Titular a cargo de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas, conjuntamente con el Director de Prevención y Reinserción Social, Directores, Jefes o Encargados de los Establecimientos Penitenciarios del Estado, en coordinación con los Directores y elementos de los diversos cuerpos policiales, en materia de Seguridad Pública que apoyan en las revisiones penitenciarias, actúen en términos de lo establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales en esta materia, siguiendo los procedimientos o protocolos previamente elaborados para tal efecto.

3. De igual manera, realicen los trámites correspondientes ante la instancias respectivas, a efecto de obtener y contar con los recursos mínimos indispensables, suficientes y eficaces para el debido funcionamiento del Sistema Penitenciario y se diseñen e implementen políticas, estrategias y mecanismos, que permitan la aplicación de los distintos protocolos para la intervención adecuada y oportuna del personal penitenciario y corporaciones policíacas sobre el control de las diversas acciones que permitan mantener el orden, la disciplina y la seguridad en los Centros de Reclusión; así como los mecanismos de actualización y formación profesional continua en materia de sistema penitenciario.

4. Además, el personal de custodia penitenciaria, adopte las medidas pertinentes a efecto de que, concluidas las revisiones penitenciarias, inmediatamente, informe las novedades, condiciones y el resultado en que se llevó a cabo el operativo de revisión.

5. Finalmente, se implementen programas de capacitación en materia de derechos humanos, dirigido al personal de custodia penitenciaria y de Seguridad Pública que apoya en realizar revisiones a los centros de reclusión, que les permita identificar las acciones u omisiones en que incurren, y cómo éstas vulneran los derechos en perjuicio de la población penitenciaria, a fin de incidir en la erradicación de éstas. De manera específica, deberá capacitárseles en el derecho a la integridad y seguridad personal, en relación con el deber del Estado garante, de las personas privadas de su libertad; así como en la normatividad existente para regular el uso de la fuerza en los centros penitenciarios, en materia de revisiones de las celdas y personas privadas de su libertad, y en el manejo de situaciones de alteración del orden.

X. RECOMENDACIONES.

Por lo anterior, y con fundamento en los 1 y 102 apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 2, 3, 4, 8, 17, 37, 51, 53, 54, 56, 57 y 58 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas se emiten las siguientes Recomendaciones:

PRIMERA. Dentro del plazo máximo de un mes, contado a partir de la aceptación de esta Recomendación, se inscriba en el Registro Estatal de Victimas a las personas privadas de la libertad relacionadas con los hechos, en calidad de víctimas directas de violaciones a sus derechos humanos, a fin de garantizar que tengan un acceso oportuno y efectivo a las medidas de ayuda previstas en esta Ley de Atención a Víctimas del Estado de Zacatecas.

SEGUNDA. Dentro del plazo máximo de un mes, contado a partir de la aceptación de la presente Recomendación, se valore y determine si los agraviados requieren de atención médica o psicológica, relacionados con los ataques sufridos en la revisión penitenciaria realizada en fecha 10 de enero de 2017. Y de ser el caso, en un plazo de un mes, posterior a la realización de dicha valoración, se realicen las gestiones necesarias para que, en caso de que así lo decidan, inicien su tratamiento, hasta su total restablecimiento.

TERCERA. Dentro del plazo máximo de un mes, se establezcan los mecanismos administrativos pertinentes, para que el personal de Policía Penitenciaria adscrito al Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas, y demás centros penitenciarios regionales y distritales del Estado de Zacatecas, reciban la capacitación adecuada, para garantizar que no se trasgreda el derecho a la integridad y seguridad de las personas privadas de su libertad que se encuentran bajo su resguardo, atendiendo a la posición de Estado Garante en que se encuentran. Asimismo, para que implementen de manera eficaz los protocolos existentes para regular el uso de la fuerza en los centros penitenciarios, en materia de revisiones de las celdas y personas privadas de su libertad, y en el manejo de situaciones de alteración del orden, a fin de evitar situaciones como las que dieron origen a la presente Recomendación, en las que se configuraron actos de violencia hacia las personas privadas de su libertad y, por ende, la vulneración a su derecho recibir una atención digna, respetuosa, oportuna y de seguridad a su persona durante su estancia en los centros penitenciario.

CUARTA. Dentro del plazo máximo de tres meses, la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado, a través del área de asunto internos, proceda a realizar la investigación administrativa que corresponda, a fin de determinar la responsabilidad y sanciones específicas de los elementos de la Policía Estatal Preventiva, de la Policía Metropolitana y de la Policía Penitenciaria que participaron en el operativo de revisión, realizado en el módulo verde, del área de procesado del Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas, en fecha 10 de enero de 2017, que incurrieron en la vulneración de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad.

QUINTA. Dentro de un plazo máximo de seis meses, contados a partir de aceptación de esta Recomendación, se realicen los trámites correspondientes ante las instancias respectivas a efecto de obtener y contar con los recursos humanos y materiales mínimos indispensables, suficientes y eficaces para el debido funcionamiento del Sistema Penitenciario consistente en la contratación del personal técnico, administrativo, profesional y penitenciario suficiente, para cubrir todas los servicios en todas las áreas del Centro de Reclusión, así como sustituir, remplazar e instalar cámaras de video vigilancia en las diversas áreas estratégicas de interiores y exteriores del centro penitenciario, que permitan tener una visibilidad de todas ellas, a fin de prevenir y detectar cualquier comportamiento que no se apegue a los lineamientos establecidos en los protocolos existentes para regular el uso de la fuerza en los centros penitenciarios, en materia de revisiones de las celdas y personas privadas de su libertad, y en el manejo de situaciones de alteración del orden, por parte del personal de custodia penitenciaria, así como, de las corporaciones de seguridad pública que acudan para garantizar la gobernabilidad del centro.

SEXTA. Dentro del plazo máximo de seis meses se diseñen e implementen talleres relacionados con políticas, estrategias y mecanismos, que permitan la aplicación de los distintos protocolos para la intervención oportuna y adecuada, del personal penitenciario y corporaciones policíacas sobre el control de las diversas acciones para mantener el orden, la disciplina y la seguridad de todas las personas recluidas en los centros de penitenciarios, con irrestricto apego al respeto a los derechos humanos y a la dignidad de las personas privadas de su libertad.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 53, párrafo segundo de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, se hace del conocimiento de la autoridad a la que va dirigida esta Recomendación, que dispone de un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente en que ésta se le notifique, para que manifieste si la acepta o no, en el entendido de que, de no aceptarla, su respuesta se hará del conocimiento de la opinión pública. En caso de que la acepte, se le notifica que dispone de un plazo de 15 días, contados a partir del vencimiento del término del que disponía para responder sobre la aceptación, a fin de enviar las pruebas de su cumplimiento.

Por último, hágasele saber a la parte quejosa que, de conformidad con el artículo 61 de la Ley de este Organismo, dispone de 30 días naturales, computados a partir de la fecha de notificación del presente documento, para que en caso de que exista inconformidad con la misma, interponga el recurso de impugnación correspondiente ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Así lo determina y firma

DRA. EN D. MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOS
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE ZACATECAS

Expediente: CDHEZ/553/2020

Tipo de queja: Oficiosa.

Persona agraviada: VD.

Autoridades responsables:
I. Director y Elementos de la Dirección de Seguridad Pública del Municipio de Juchipila, Zacatecas.

Derechos humanos vulnerados:
I. Derecho a la integridad y seguridad personal, en su modalidad a no ser sometido a penas o tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Zacatecas, Zac., a 17 de diciembre de 2021; una vez concluida la investigación de los hechos que motivaron el expediente CDHEZ/553/2020, realizada por la Visitaduría Regional de Jalpa, Zacatecas, y la redacción y elaboración del proyecto de Recomendación, por la Coordinación General de Asuntos Jurídicos, la suscrita aprobó, de conformidad con los artículos 4, 8 fracción VIII, 17 fracción V, 37, 51, 53 y 56 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, en relación con lo dispuesto por los numerales 27, fracción VIII, 40, 161, fracción X, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 y 175, del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, la **Recomendación 57/2021**, que se dirige a la autoridad siguiente:

MTRA. MARÍA DEL ROCÍO MORENO SÁNCHEZ, Presidenta Municipal de Juchipila, Zacatecas.

R E S U L T A N D O;

I. DE LA CONFIDENCIALIDAD.

1. De conformidad con los artículos 6°, Apartado A, fracción II y 16, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 23 y 85 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, los datos personales las víctimas relacionadas con esta Recomendación, así como aquellos relativos a su vida privada y familiar, permanecerán como confidenciales, ya que éstos no tienen el carácter de ser públicos.

II. RELATORÍA DE LOS HECHOS Y OBJETO DE LA CONTROVERSIA.

1. En fecha 30 de noviembre de 2020, a través del medio informativo “Imagen”, se publicó la nota periodística con título “Golpean Policías de Juchipila a sujetos detenidos”.

El 30 de noviembre de 2020, el Departamento de Orientación y Quejas de este Organismo, inició queja de manera oficiosa, por la publicación de la nota señalada. Lo anterior, con fundamento en el artículo 30, párrafo tercero de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, en relación con el numeral 63, fracción V del Reglamento que rige el actuar de este Organismo.

En misma fecha, se radicó formal queja en la Visitaduría Regional del municipio de Jalpa, Zacatecas, bajo el número de expediente citado al rubro, a efecto de formular el acuerdo de

calificación de ésta, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 123 y 124 del Reglamento de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas.

El 30 de noviembre de 2020, los hechos se calificaron como una presunta violación al derecho a la integridad y seguridad personal, en su modalidad de derecho a no ser sometido a penas o tratos crueles, inhumanos y degradantes, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 123 y 124 fracción I, del Reglamento de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas.

2. Los hechos materia de la queja consistieron en lo siguiente:
En fecha 30 de noviembre de 2020, a través de la nota periodística publicada en el medio informativo “Imagen”, de título “Golpean Policías de Juchipila a sujetos detenidos”, se informó a la ciudadanía que elementos de la Dirección de Seguridad Pública de Juchipila, Zacatecas, golpearon a dos personas que se encontraban en separos preventivos de dicha municipalidad.

3. El 15 de diciembre de 2020, el **ARQ. RAFAEL JIMÉNEZ NÚÑEZ**, Presidente Municipal de Juchipila, Zacatecas, rindió el informe respectivo.

III. COMPETENCIA.

1. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, es competente, en términos de los artículos 1º, 4º, 6º, 8º fracción VII, inciso A) y 31 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, en relación con los numerales 15, 22 y 23 de su Reglamento Interno, debido a que la queja se promueve en contra de servidores públicos adscritos a la Dirección de Seguridad Pública del municipio de Juchipila, Zacatecas, por hechos presuntamente ocurridos en el año 2020.

2. De conformidad con el artículo 124, fracción I del Reglamento Interior de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, este Organismo advierte que, de los hechos materia de la queja, se puede presumir la violación de los derechos humanos de la parte agraviada, así como la responsabilidad por parte de los servidores públicos señalados.

3. Esta Comisión acreditó la violación de los siguientes derechos:

a) Derecho a la integridad y seguridad personal, en su modalidad a no ser sometido a penas o tratos crueles, inhumanos y degradantes.

IV. PROCEDIMIENTO ANTE LA COMISIÓN.

Con la finalidad de documentar las presuntas violaciones a derechos humanos, así como para determinar la existencia o no de responsabilidad, por parte de los servidores públicos señalados, este Organismo realizó entrevistas a las personas relacionadas con los hechos; se recabaron comparecencias de personal adscrito a la dirección de Seguridad Pública del municipio de Juchipila, Zacatecas; se solicitó informe a la autoridad señalada como responsable, así como informe en vía de colaboración, se realizó inspección de CD relacionado con los hechos motivo de queja, se realizó investigación de campo en el lugar de los hechos y demás diligencias necesarias para emitir la resolución correspondiente.

V. PRUEBAS.

Con base en lo estipulado en los artículos 48 y 49 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, en relación con los numerales 150, 151, 152, 153 y 154 del Reglamento Interior de este Organismo, durante el procedimiento realizado por esta Institución se recabaron los elementos probatorios documentales, remitidos tanto por la parte agraviada como por las autoridades señaladas como responsables, así como

documentación, dictámenes e inspecciones necesarios para la emisión de la presente Recomendación.

VI. CONSIDERACIONES PREVIAS

1. Antes de entrar en materia, la Comisión estima preciso hacer dos consideraciones previas relacionadas con la oportunidad de la apertura oficiosa del expediente y con la presunta responsabilidad de los servidores públicos del municipio de Juchipila, Zacatecas.

2. En cuanto a lo primero, si bien los hechos ocurrieron en 2015 (como parecen apuntarlo los indicios más solventes), no existe impedimento legal alguno para entrar al estudio de los mismos, pues según el artículo 31 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, el plazo para presentar una queja, o iniciarla en forma oficiosa, es de un año a partir de que se tenga conocimiento de los hechos. De este modo, el plazo se refiere a la fecha de conocimiento y no al momento en que históricamente acontecieron los sucesos investigados. Por consiguiente, si esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, tuvo conocimiento de los hechos materia de la presente Recomendación en virtud de una nota periodística, difundida el 30 de noviembre de 2020, es claro que se encontraba en aptitud de abrir el expediente que nos ocupa. Mismo que dio inicio de manera inmediata, en esa misma fecha, 30 de noviembre de 2020.

3. Por otra parte, si bien la autoridad presuntamente responsable señaló que los hechos referidos en la nota periodística ocurrieron en administraciones municipales diversas a la en que éstos se dieron a conocer, no pasa inadvertido para este Organismo que, al tratarse de violaciones graves, al estar relacionadas con posibles vulneraciones al derecho a la integridad y seguridad personal, en su modalidad de tortura otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes, la responsabilidad del estado, en este caso concreto, de las autoridades municipales, como persona de derecho público, se mantiene inalterada, toda vez que, dichas conductas son imprescriptibles, por constituir una violación directa de la dignidad humana. En adición a que, dichas violaciones deben ser investigadas de oficio.

4. En razón a lo anterior, esta Comisión estima que, el argumento defensivo esgrimido por la autoridad señalada como responsable, en el sentido de que los hechos no ocurrieron durante su administración y, en consecuencia, no pueden investigarse, carecen de validez, al tratarse de violaciones graves a los derechos humanos, mismas que, por atentar directamente contra la dignidad humana, son imprescritibles y deben perseguirse e investigarse de oficio por el Estado.

VII. SOBRE LOS DERECHOS VULNERADOS

En congruencia con lo expuesto a lo largo del apartado III, en lo que sigue se entrará al fondo de la cuestión a fin de determinar si los indicios de violación advertidos en el caso constituyen una afectación injustificada al ámbito definitivo de los derechos fundamentales aludidos. Con ese fin, este apartado se dividirá en diversos parágrafos tendientes a explicitar la cadena argumental seguida por la Comisión.

I. El carácter de los derechos fundamentales y la obligación de los Estados

1. En términos del primer párrafo del artículo 1º constitucional, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección; por lo tanto, el ejercicio de aquellos no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la Constitución establece. Con base en esta previsión, puede concluirse que la Ley Fundamental reconoce una variada pléyade de facultades, prerrogativas, libertades y pretensiones de carácter civil, económico, social y cultural que, en su conjunto, pretenden asegurar los medios para que la persona pueda desarrollar una existencia

autónoma y goce de la igual consideración y respeto. Para ello, la Constitución no se contenta solo con establecer sendas declaraciones dogmáticas, sino que también ha instrumentado un amplio conjunto de mecanismos procesales para asegurar el cumplimiento efectivo de los derechos ahí establecidos.[1]

2. Los derechos fundamentales han de distinguirse con toda claridad de los derechos subjetivos patrimoniales, no solamente porque se encuentran "reconocidos" desde la escala más alta de la pirámide de la juridicidad, sino que, en razón de su título universal de asignación y su disponibilidad para los particulares y la autoridad, resultan dotados de la máxima garantía que el derecho positivo puede conferirles. Se trata de derechos atribuidos a todos los sujetos en cuanto dotados del estatus de personas, de ciudadanos o de sujetos con capacidad de obrar.[2] Por eso, a diferencia de los derechos subjetivos patrimoniales, donde su titular goza de ellos con exclusión de los demás, los derechos constitucionales son derechos que todos detentan en pie de igualdad.

3. Pero las diferencias no terminan aquí. Si bien hasta ahora se ha preferido la expresión "derechos fundamentales" en lugar de "derechos humanos", precisamente para denotar el carácter fuertemente positivizado de los primeros, ello no quiere decir que la base de sustentación de los derechos se encuentre solo en el poder de la carta que los contiene. Por el contrario, los derechos representan la plasmación de un denso contenido axiológico que ha dejado de gravitar sobre las constituciones para migrar al interior de ellas. En un sentido superador de la clásica dicotomía entre el positivismo jurídico y el derecho natural, la edad de las declaraciones marcó el inicio de un proceso de constitucionalización al final del cual; no quedan en el ordenamiento espacios libres a la influencia de los derechos fundamentales. Bajo esta premisa, el Estado de Derecho puede calificarse de "constitucional" y expandir sus confines para disciplinar, además de las relaciones jurídicas entre los particulares y la autoridad, ciertos aspectos de los nexos creados por los particulares entre sí y, desde luego, para disciplinar la actividad del Estado en el plano de la responsabilidad internacional a causa de violaciones a tales derechos. El paradigma constitucional entonces se ha abierto en una tendencia integradora tanto a la escala antes cerrada del derecho privado como al nivel multinacional de la protección regional de los derechos humanos.

4. Además, la previsión de una carta constitucional plenamente vinculante, es decir, dotada de la eficacia de una norma jurídica de especial cualidad, comporta un giro desde el ámbito de los deberes hasta llegar al plano de los derechos. En el comienzo de su historia, los derechos estaban vinculados a una concepción individualista de la sociedad donde la primacía del deber se hallaba puesta al servicio de determinadas expectativas en beneficio del sujeto. Empero, esas expectativas eran mínimas y representaban simples abstenciones para el poder. Es por ello que los códigos regulatorios de la conducta en el ámbito de la moral y el derecho fueron creados para salvaguardar al grupo social en detrimento de sus miembros particulares. Había, por tanto, una primacía de los deberes sobre los derechos. Sin embargo, una vez que las declaraciones constitucionales se tornaron plenamente vinculantes, la relación de precedencia deber-derecho se invirtió.[3]

5. Esto no quiere decir que a tenor de las cartas de derechos se pueda desplegar un ejercicio libérrimo de la voluntad del sujeto, pues de esta manera los derechos devendrían absolutos y no sería posible armonizar sus exigencias de manera complementaria (por ejemplo, en el ámbito individual y social). En cambio, lo que quiere dar a entenderse es que son los derechos quienes legitiman la acción del poder público, de manera que toda irrupción no autorizada dentro de las posiciones jurídicas garantizadas por ellos se convierte en un ilícito de carácter constitucional que debe ser reparado por los medios posibles a fin de que la Constitución no resulte vulnerada.

---

[1] Cfr. Rodríguez y Rodríguez, Jesús, "Derechos humanos", en Carbonell, Miguel (coord.), *Diccionario de derecho constitucional,* 3ª ed., México, Porrúa-IIJ/UNAM, 2009, pp. 481-484.

[2] Para una amplia discusión sobre el concepto de los derechos fundamentales, véase: Ferrajoli, Luigi, *et. al*. (Antonio de Cabo y Gerardo Pisarello, eds.), *Los fundamentos de los derechos fundamentales*, 4ª ed., Madrid, Trotta, 2009.

[3] Cfr. Bobbio, Norberto, "La primacía de los derechos sobre los deberes", trad. de Magdalena Lorenzo, *Teoría general de la política,* 3ª ed., Madrid, Trota, 2009, pp. 513-515.

6. Los derechos son conquistas históricas impuestas al poder público. Por eso, la autoridad solo posee capacidad para reconocerlos y acotarlos (ya que ningún derecho es absoluto), pero siempre que en dicha actividad se realice dentro de los márgenes establecidos por la Constitución. En virtud de esa vinculación de la autoridad a los contenidos de la Ley Fundamental, se establece un modelo de Constitución normativa a partir del cual, el legislador y en general el resto de los poderes públicos, vienen obligados a respetar el contenido de todos los preceptos constitucionales, ya sea al definir el sentido y alcance de las normas subordinadas a aquellos, o bien, al momento de emitir cualquier acto que pueda traducirse en un principio de afectación para las expectativas garantizadas.[4]

7. A expensas del proceso de constitucionalización,[5] los derechos fundamentales cumplen una función dual dentro del ordenamiento. Conforme a su clásica tarea subjetiva, pueden contemplarse como elementos protectores de ciertos bienes básicos para la existencia digna de las personas. En este sentido, los derechos amparan posiciones de seguridad personal, según las cuales, por ejemplo, las personas saben que no deberán ser molestadas en sus papeles posesiones o derechos sin un mandato escrito de la autoridad competente, o que no podrán ser privados de la libertad sin una orden judicial que así lo determine. Sin embargo, al lado de esa faceta aseguradora de carácter subjetivo, los derechos se han convertido en elementos legitimadores del sistema jurídico y democrático en sentido amplio (dimensión objetiva).[6] Para decirlo con las palabras de un reciente criterio jurisprudencial:

> *Los derechos fundamentales gozan de una doble cualidad dentro del ordenamiento jurídico mexicano, ya que comparten una función subjetiva y una objetiva. Por una parte, la función subjetiva implica la conformación de los derechos fundamentales como derechos públicos subjetivos, constituyéndose como inmunidades oponibles en relaciones de desigualdad formal, esto es, en relaciones con el Estado. Por otro lado, en virtud de su configuración normativa más abstracta y general, los derechos fundamentales tienen una función objetiva, en virtud de la cual unifican, identifican e integran, en un sistema jurídico determinado, a las restantes normas que cumplen funciones más específicas. Debido a la concepción de los derechos fundamentales como normas objetivas, los mismos permean en el resto de componentes del sistema jurídico, orientando e inspirando normas e instituciones pertenecientes al mismo*.[7]

8. Ahora bien, el papel plenamente vinculante de los derechos fundamentales no ha sido reconocido solo en la sede del derecho interno, sino que se encuentra soportado en diversos instrumentos internacionales vinculantes para el Estado Mexicano. En efecto, el deber de atenerse al bloque de constitucionalidad como parámetro de análisis de la conducta desplegada por la autoridad, es un imperativo que se sigue del deber de los Estados para respetar y garantizar los derechos humanos. A este propósito, conviene recordar que el artículo 1º de la Convención Americana, señala que:

> ***Artículo 1º.*** *1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de*

---

[4] Cfr. Prieto Sanchís, Luis, “Contenido esencial (de los derechos fundamentales)”, en Carbonell, Miguel (coord.), *op. cit.*, pp. 235-239

[5] En torno a las características del proceso de constitucionalización y sus implicaciones, véase: Guastini, Ricardo, *Estudios de teoría constitucional,* 2ª ed., México, Fontamara, 2007, pp. 147-177.

[6] Sobre estas funciones, puede verse: Rodríguez Durón, Everardo, *El control constitucional ante el desafío democrático. Un acercamiento al problema contramayoritario en el derecho constitucional mexicano,* tesis profesional para obtener el grado de Maestro en Justicia Constitucional, Universidad de Guanajuato, 2017, p. 171.

[7] Véase *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación,* 10ª época, libro 34, tomo I, p. 333. Desde luego, no pasa desapercibido para esta Comisión que, en términos de lo dispuesto 217 de la Ley de Amparo, este criterio solamente es vinculante para las autoridades de naturaleza jurisdiccional, sin embargo, la Comisión considera que las razones que informan el criterio condensan su propio parecer sobre la cuestión, de manera que se puede hacer un uso argumental de esta clase de criterios. Con esa salvedad, donde quiera que en esta recomendación se haga uso de precedentes derivados de los criterios jurisprudenciales sentados por los órganos del Poder Judicial de la Federación, debe entenderse que la Comisión considera favorablemente el sentido interpretativo que de ellos deriva.

> *cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 2. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano.*

9. Y, en el mismo sentido, el artículo 2º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos estipula:

> ***Artículo 2º.*** *1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción, los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 2. Cada Estado Parte se compromete a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones del presente Pacto, las medidas oportunas para dictar las disposiciones legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos en el presente Pacto y que no estuviesen ya garantizados por disposiciones legislativas o de otro carácter. 3. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a garantizar que: a) Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente Pacto hayan sido violados podrá interponer un recurso efectivo, aun cuando tal violación hubiera sido cometida por personas que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales; b) La autoridad competente, judicial, administrativa o legislativa, o cualquiera otra autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado, decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso, y desarrollará las posibilidades de recurso judicial; c) Las autoridades competentes cumplirán toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.*

10. Consecuentemente, la Comisión estima que el análisis de las presuntas violaciones cometidas en la especie solamente puede realizarse desde una perspectiva metodológica fundada en el deber de todas las autoridades del Estado Mexicano para promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos, tal como lo determina el artículo 1º de la Constitución.

11. Desde luego, en las afirmaciones anteriores no pasa desapercibido que, en términos de lo dispuesto por los artículos 37, 51 y 53 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, este organismo no puede sustituirse a las funciones que corresponden a otras autoridades o niveles de gobierno para dejar insubsistentes actuaciones o determinaciones que son competencia exclusiva de aquellos. La Comisión tampoco puede enderezar un estudio tomando solo como referencia los criterios sustantivos o formales en que las autoridades soportaron sus decisiones, pues ello comportaría perder el parámetro de análisis constitucional que vincula directamente a este organismo. Por eso, en exclusiva lo que corresponde a la Comisión es determinar si –a la luz de la Constitución y del derecho internacional de los derechos humanos aceptado en los compromisos suscritos por el Estado Mexicano– existió (o no) una violación a los derechos de los quejosos.

12. Sentados las consideraciones anteriores, entremos en materia. Como se sabe, los derechos fundamentales constituyen un haz de posiciones y normas vinculadas a una disposición de derecho fundamental. Por ello, cabe concluir que las relaciones jurídicas denotadas por esta clase de derechos se dan entre dos sujetos y un objeto. Entre los sujetos existe una relación generalmente de supra a subordinación, a tenor de la cual, el primero de ellos –el sujeto activo– está en condiciones de exigir de la autoridad –el sujeto pasivo– ciertas conductas activas u omisivas que representan el contenido del derecho.

13. Como se aprecia en la identificación de derechos violados del apartado III, es preciso desplegar un ejercicio hermenéutico de concreción de los derechos fundamentales implicados en el asunto, ya que –como se verá en los apartados ulteriores donde se les dote

de contenido– cada disposición de derecho fundamental susceptible de desdoblarse en una cantidad variable de normas de derecho fundamental adscritas, ya que no existe una correspondencia univoca entre un precepto (disposición) consagrado, por ejemplo, en la Constitución o en los tratados internacionales aplicables, y las "normas de derecho fundamental" que efectivamente se derivan de la primera.[8]

14. Sobre estas consideraciones teóricas y metodológicas, se considera pertinente dotar de contenido a los derechos fundamentales cuya violación preliminar se ha identificado en la especie. Para estos efectos, la Comisión desplegará una cadena argumental que irá de lo general a lo particular, y que en un orden descendente permitirá sentar las premisas normativas y fácticas indispensables para apreciar la regularidad (o irregularidad) de los actos atribuidos a las autoridades responsables. Por lo tanto, la operación para definir los contenidos vinculantes de los derechos fundamentales implicados describirá un proceso de concreción que transita del género iusfundamental hasta llegar a la manifestación concreta de la vulneración.

II. Contenido del derecho a la seguridad e integridad personal.

15. Con base en el reconocimiento de la dimensión objetiva de los derechos que se ha referido antes, se puede colegir la manera en la cual el proceso de positivización de los derechos fundamentales ha seguido un ritmo ascendente. En especial, además del fortalecimiento de los mecanismos de tutela y garantía en el derecho interno, se advierte una progresiva tendencia a internacionalización y a la formación de bloques regionales de protección. En el caso del Estado Mexicano, estos compromisos internacionales en la materia se encuentran, sobre todo, en el marco del sistema internacional y del conjunto interamericano para la protección de los derechos. Así, el reconocimiento de la subjetividad del individuo se encuentra ya en la Carta de la Organización de las Naciones Unidas de 1945, como un elemento directamente vinculado con el fundamento de los derechos.[9] En su preámbulo, los Estados firmantes –entre ellos nuestro país– reafirmaron la fe en "los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres", y por ello, se incluyó como uno de los propósitos esenciales de organización creada, en términos del artículo 1.3 de la Carta, "el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión".[10] Por lo tanto, es indudable que los derechos reflejan valores comunes de la humanidad y como tal, deben ser protegidos y desarrollados en el ámbito de sus competencias y hasta el máximo de las condiciones fácticas y jurídicas existentes por las autoridades de cada Estado.

16. Empero, el momento fundacional del sistema internacional de protección auspiciado por el compromiso posterior a la Segunda Guerra Mundial, fue un acuerdo incompletamente teorizado. Es decir, en esa oportunidad no se definieron ni se mencionaron en forma específica cuáles eran esos derechos. Así, en el ámbito universal, luego de la tarea desarrollada por la Comisión de Derechos Humanos, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó, el 10 de diciembre de 1948, la resolución 217 que contiene la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entre los derechos y libertades allí contenidas se contemplan los principios referidos al derecho a la vida, la libertad, la igualdad, la integridad física y psíquica, entre otros. Este último, se consagra a partir de la norma que prohíbe la tortura, las penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. En 1966, con el carácter de tratado internacional, los Estados, bajo los auspicios de las Naciones Unidas, adoptaron el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que contiene concretos derechos y

---

[8] Por ello las teorías más socorridas para explicar la estructura de los derechos humanos parten de distinguir entre las normas de derecho fundamental y las disposiciones de derecho fundamental. Así, mientras que las disposiciones son los enunciados directamente formulados por los artículos de las declaraciones fundamentales, las normas son "el significado normativo" directamente expresado por las disposiciones. Cfr. Alexy, Robert, *Teoría de los derechos fundamentales,* trad. de Carlos Bernal Pulido, 2ª ed. Madrid, CEPC, 2012, pp. 31-62.

[9] Pinto, Mónica, *Temas de derechos humanos*, Buenos Aires, Editores del Puerto, 1997, p. 15.

[10] Gutiérrez Posse, Hortensia, *Guía para el conocimiento de los elementos de derecho internacional público*, Buenos Aires, La Ley, 2003, p. 261.

obligaciones, entre los que se establece la prohibición mencionada y estipulada por la declaración, además de haber incluido el derecho de las personas privadas de libertad a un trato humano con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. Después, ya en el seno interamericano, la novena Conferencia Internacional Interamericana adoptó, en 1948, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Esta al igual que la declaración universal contempla derechos civiles y políticos, como así también derechos económicos sociales y culturales. En cuanto a lo que ahora importa, la Declaración Americana resulta particular en cuanto establece que: "todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad", además de las disposiciones referidas al tratamiento humano de todo individuo privado de su libertad. Es verdad que esta norma interamericana, en su momento, tampoco hizo mención del derecho a la integridad, sin embargo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó que la tortura no se justifica por ser contraria a la dignidad humana y violatoria de la integridad de la persona consagrada en el artículo 1º de la Declaración Americana. Así, entendió que el concepto de seguridad personal comprende la integridad personal.[11] Con posterioridad, en el seno de la Organización de Estados Americanos, se adoptó en 1969 la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo en estudio recepta expresamente el derecho a la integridad personal.

17. Por lo tanto, existen diversos elementos del bloque de constitucionalidad –reconocido por el artículo 1º constitucional– donde se encuentra estatuido el derecho a la seguridad e integridad personal. En principio, el artículo 5º de la Declaración Universal de Derechos Humanos, establece que:

> **Artículo 5º.** Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

18. Por su parte, los artículos 7º y 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, señalan:

> **Artículo 7º.** Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. En particular, nadie será sometido sin su libre consentimiento a experimentos médicos o científicos.
> **Artículo 10.** 1. Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. 2. a) Los procesados estarán separados de los condenados, salvo en circunstancias excepcionales, y serán sometidos a un tratamiento distinto, adecuado a su condición de personas no condenadas; b) Los menores procesados estarán separados de los adultos y deberán ser llevados ante los tribunales de justicia con la mayor celeridad posible para su enjuiciamiento. 3. El régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación social de los penados. Los menores delincuentes estarán separados de los adultos y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su edad y condición jurídica.

19. Además, los artículos 1º y siguientes de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes establece lo siguiente en relación con el objeto del acuerdo internacional:

> **Artículo 1º.** 1. A los efectos de la presente Convención, se entenderá por el término "tortura" todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a

[11] Sobre ello, véase: O'Donnell, Daniel, *Derecho internacional de los derechos humanos. Normativa, jurisprudencia y doctrina de los sistemas universal e interamericano*, t. 1, Bogotá, Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2004, 1ª ed., p. 170.

> instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas; 2. El presente artículo se entenderá sin perjuicio de cualquier instrumento internacional o legislación nacional que contenga o pueda contener disposiciones de mayor alcance.

20. En ese orden, el artículo 5º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) determina:

> **Artículo 5º. *Derecho a la integridad personal.*** 1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. 2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. 3. La pena no puede trascender de la persona del delincuente. 4. Los procesados deben estar separados de los condenados, salvo en circunstancias excepcionales, y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su condición de personas no condenadas. 5. Cuando los menores puedan ser procesados, deben ser separados de los adultos y llevados ante tribunales especializados, con la mayor celeridad posible, para su tratamiento. 6. Las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados.

21. El conjunto de disposiciones internacionales transcritas revela que las afectaciones al derecho a la seguridad e integridad personal, son una cuestión de grados. En efecto, para la Corte Interamericana de Derechos Humanos –en adelante CoIDH–, la infracción del derecho a la integridad física y psíquica de las personas es una clase de violación que tiene diversas connotaciones de grado y que abarca desde la tortura hasta otro tipo de vejámenes o tratos crueles, inhumanos o degradantes cuyas secuelas físicas y psíquicas varían de intensidad según los factores endógenos y exógenos que deberán ser demostrados en cada situación concreta. En este sentido, el colegio jurisdiccional de San José, invoca los precedentes sentados por la Corte Europea de Derechos Humanos quien, por ejemplo, ha sostenido que, aún en la ausencia de lesiones, los sufrimientos en el plano físico y moral, acompañados de turbaciones psíquicas durante los interrogatorios, pueden ser considerados como tratos inhumanos. El carácter degradante se expresa en un sentimiento de miedo, ansia e inferioridad con el fin de humillar, degradar y de romper la resistencia física y moral de la víctima. Por lo tanto, dice la CoIDH, todo uso de la fuerza que no sea estrictamente necesario por el propio comportamiento de la persona detenida constituye un atentado a la dignidad humana en violación del artículo 5 de la Convención Americana.[12] En este sentido, la Corte –retoma un añoso argumento que ya se encuentra en el *Tratado de los delitos y de las penas* de Beccaria en el sentido de que “las características personales de una supuesta víctima de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes, deben ser tomadas en cuenta al momento de determinar si la integridad personal fue vulnerada, ya que tales características pueden cambiar la percepción de la realidad del individuo, y por ende, incrementar el sufrimiento y el sentido de humillación cuando son sometidas a ciertos tratamientos.”[13] En síntesis, para la CoIDH

---

[12] Cfr. *Caso Loayza Tamayo Vs. Perú*. Sentencia de 17 de septiembre de 1997, párr. 57; en el mismo sentido, *Caso Caesar Vs. Trinidad y Tobago. Fondo, Reparaciones y Costas*. Sentencia 11 de marzo 2005, párr. 69; *Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas*. Sentencia de 30 de mayo de 19996, párr. 196; *Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas*. Sentencia de 25 de octubre de 2012, párr. 147; *Caso Norín Catrimán y otros (Dirigentes, miembros y activista del Pueblo Indígena Mapuche) Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas*. Sentencia de 29 de mayo de 20148, párr. 388.

[13] Véase: *Caso Ximenes Lopes vs. Brasil*. Sentencia de 4 de julio de 2006, párr. 127. En el mismo tenor, cfr. *Caso Familia Barrios vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas*. Sentencia de 24 de noviembre de 20119, párr. 52; *Caso Vélez Restrepo y Familiares Vs. Colombia. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas*. Sentencia de 3 de septiembre de 2012, párr. 176; *Caso J. Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas*. Sentencia de 27 de noviembre de 2013, párr. 362; *Caso Quispialaya Vilcapoma Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas*.

> […] “la infracción del derecho a la integridad física y psíquica de las personas es una clase de violación que tiene diversas connotaciones de grado y que abarca desde la tortura hasta otro tipo de vejámenes o tratos crueles, inhumanos o degradantes, cuyas secuelas físicas y psíquicas varían de intensidad según los factores endógenos y exógenos que deberán ser demostrados en cada situación concreta”. Los primeros se refieren a las características del trato, tales como la duración, el método utilizado o el modo en que fueron infligidos los padecimientos, así como los efectos físicos y mentales que éstos pueden causar. Los segundos remiten a las condiciones de la persona que padece dichos sufrimientos, entre ellos la edad, el sexo, el estado de salud, así como toda otra circunstancia personal.[14]

22. Así las cosas, en cuanto al contenido de este derecho, parte de la doctrina entendió que “el derecho a la integridad física y psíquica implica la preservación, sin detrimento alguno de la integridad del cuerpo y la mente, excluyéndose por tanto las penas, procedimientos y tratamientos que tengan por resultado la privación o inhabilitación intencional de alguna parte del cuerpo humano o de algunas de las facultades de la mente o del espíritu y cualquiera fuere el propósito con que tales actos se cumplan, excepto con fines medicinales como en las hipótesis de los trasplantes de órganos entre seres humanos”. La tutela de esta libertad se extiende no sólo a la prohibición de conductas de las que se siga un deterioro permanente para la persona humana, sino también la de aquellas que, sea cual fuere su finalidad, constituyan tratamientos crueles, inhumanos o degradantes.[15] Así, puede entenderse que la integridad personal constituye el bien jurídico protegido por la norma que prohíbe la tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanas o degradantes previstas en el artículo 5º del Pacto de San José.

23. El respeto a la integridad personal como así también las prohibiciones enumeradas en el instrumento internacional buscan proteger la dignidad inherente al ser humano, y por este motivo, se ha reconocido que la amplitud de situaciones en que este derecho particular podría ser vulnerado va más allá de las prohibiciones establecidas en la Convención Americana. Para la CoIDH “todo uso de la fuerza que no sea estrictamente necesario por el propio comportamiento de la persona detenida constituye un atentado a la dignidad humana”, en violación del artículo 5 del Pacto Interamericano.[16] A guisa de ejemplo, el colegio de San José estima –en uno de los casos sometidos a su potestad– que si “después de ser detenido por agentes de la Policía” un sujeto “fue introducido en la maletera del vehículo oficial” ello “constituye una infracción al artículo 5 de la Convención que tutela la integridad personal, ya que, aun cuando no hubiesen existido otros maltratos físicos o de otra índole, esa acción por sí sola debe considerarse claramente contraria al respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”.[17]

24. Como se ve, según las disposiciones internacionales transcritas, así como de la interpretación que de estos preceptos ha realizado la CoIDH, el derecho a la seguridad e integridad personal posee un contenido mayor al que preliminarmente pudiera adscribírsele, pues no limita solo a tutelar posiciones contra los actos de tortura o los ejemplos claros e indiscutidos de actos crueles, inhumanos o degradantes, sino que también proscribe cualquier uso desmedido de la fuerza que afecte la sustantividad física, psicológica o moral de las personas, ya que también ellos son contrarios a la dignidad humana que es, en última instancia, el valor constitucional al que estos derechos protegen.[18] Así, resulta importante

---

[14] Véase: *Caso Norín Catrimán y otros (Dirigentes, miembros y activista del Pueblo Indígena Mapuche) Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas*. Sentencia de 29 de mayo de 2014, párr. 388.

[15] Cfr. Padilla, Miguel, *Lecciones sobre derechos humanos y garantías*, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1995, p. 125.

[16] Véase: *Caso Loayza Tamayo Vs. Perú*. Sentencia de 17 de septiembre de 1997, párr. 57.

[17] Cfr. *Caso Castillo Páez Vs. Perú*, Sentencia de 3 de noviembre de 1997, párr. 66.

[18] Al respecto, la CoIDH sostiene: que “El artículo 5.1 de la Convención consagra el derecho a la integridad personal, física, psíquica y moral. […] Asimismo, el Tribunal ha sostenido que la mera amenaza de que ocurra una conducta prohibida por el artículo 5 de la Convención, cuando sea suficientemente real e inminente, puede en sí misma estar en conflicto con el derecho a la integridad personal. En ese sentido, crear una situación amenazante o amenazar a un individuo con quitarle la vida puede constituir, en algunas circunstancias, al menos, tratamiento inhumano. La Corte también se ha referido a los elementos que deben estar presentes para

destacar que el derecho a la integridad personal, en todas sus formas, debe protegerse en todos los ámbitos de desarrollo del individuo dado que su vulneración ha sido señalada en reiteradas oportunidades tanto por la jurisprudencia nacional como internacional.

III. La prohibición de cometer tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes.

25. Además de la protección general a la integridad personal, la norma tutela la prohibición absoluta de someter a toda persona a torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes. Tal como se mencionó, esta misma disposición se encuentra contemplada en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos. Este último, profundiza esta prohibición disponiendo que "en particular, nadie será sometido sin su libre consentimiento a experimentos médicos o científicos". En este sentido, la CoIDH en reiteradas oportunidades recordó que la tortura y las penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes están estrictamente prohibidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Así, afirmó la existencia de una prohibición universal, en ambos casos, independientemente de cualquier codificación o declaración, por ser todos éstos violatorios de normas perentorias de derecho internacional.

26. Por lo tanto, la proscripción de los tratos crueles inhumanos y degradantes es absoluta e inderogable, aún en las circunstancias más difíciles, tales como guerra, amenaza de guerra, lucha contra el terrorismo, combate al narcotráfico o persecución de la delincuencia y cualesquiera otros delitos, estado de sitio o de emergencia, conmoción o conflicto interior, suspensión de garantías constitucionales, inestabilidad política interna u otras emergencias o calamidades públicas. Además, la CoIDH reconoció la existencia de un régimen jurídico internacional de prohibición absoluta de todas las formas de tortura, tanto física como psicológica, y que éste pertenece en la actualidad al dominio del *ius cogens.* Al fallar el *Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri Vs. Perú*, el tribunal interamericano sostuvo que las personas en condición de detención se encuentran en "

> […] una situación agravada de vulnerabilidad, de la cual surge un riesgo cierto de que se le vulneren otros derechos, como el derecho a la integridad física y a ser tratada con dignidad. Igualmente, esta Corte ha señalado que basta con que la detención ilegal haya durado breve tiempo para que se configure, dentro de los estándares del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, una conculcación a la integridad psíquica y moral, y que cuando se presentan dichas circunstancias es posible inferir, aun cuando no mediaran otras evidencias al respecto, que el trato que la víctima recibió durante su incomunicación fue inhumano y degradante […] Es pertinente además tener presente que la Corte ha dicho anteriormente que el mero hecho de ser introducido en la maletera de un vehículo constituye una infracción al artículo 5 de la Convención que tutela la integridad personal, ya que, aún cuando no hubiesen existido otros maltratos físicos o de otra índole, esa acción por sí sola debe considerarse claramente contraria al respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. *En el presente caso, las presuntas víctimas, durante su detención y antes de su muerte, recibieron maltratos físicos y psíquicos consistentes en: ser arrojadas al suelo, golpeadas a puntapiés, un policía se paró sobre sus espaldas y otros policías les cubrieron la cabeza*. Además, fueron golpeadas a culatazos de escopeta y posteriormente asesinadas […].

27. Así las cosas, a decir de la CoIDH existe un régimen jurídico internacional según el cual se decanta una prohibición absoluta de todas las formas de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, tanto física como psicológica. La Corte incluso señala que esa prohibición pertenece en la actualidad al dominio del *ius cogens.* En consecuencia, los actos ilícitos violatorios de normas imperativas o de *ius cogens*, por ejemplo, en el caso de los tratos crueles, inhumanos o degradantes, en determinadas circunstancias, cuando estas

---

considerar un hecho como tortura". Cfr. *Caso Vélez Restrepo y Familiares Vs. Colombia. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas*. Sentencia de 3 de septiembre de 2012, párr. 176.

constituyan violaciones graves al derecho internacional humanitario o al derecho internacional de los derechos humanos, podrán configurar un crimen internacional, en la medida en que estas conductas contrarias a derecho, reúnan los elementos específicos de cada uno de ellos.

28. Ahora bien, la dificultad surge en la distinción entre tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. La Declaración de Naciones Unidas contra la Tortura define el primero de ellos como "una forma agravada y deliberada de trato o pena cruel, inhumano o degradantes", mientras que, en la Convención contra la Tortura, los Estados partes se comprometen en prohibir en el territorio bajo su jurisdicción "otros actos que constituyan tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y que no lleguen a ser tortura", con los mismos requisitos establecidos para esta última. Así, se trasluce la falta de definiciones concretas y de criterios objetivos para determinar el concepto de cada uno de estos términos, motivo por el cual, la jurisprudencia internacional se ha encargado, de alguna manera, de determinar el alcance preciso. Así, conforme a los precedentes de la Corte Europea de Derechos Humanos, que en esta parte pueden servirnos como elemento interpretativo de carácter comparado, la diferencia entre uno y otro ilícito contra los derechos humanos se debe principalmente a la intensidad de los sufrimientos infligidos. Según aquel tribunal internacional, la distinción entre la noción de tortura y la de tratos inhumanos o degradantes, podrían concretarse a través de técnicas específicas de interrogación, como la privación de líquidos, alimentación y sueño, la exposición continua a ruidos fuertes, el mantener al preso encapuchado y obligarlo a permanecer por largos ratos en posturas físicas extenuantes. Para el tribunal se trataba de tratos inhumanos y degradantes, y no de torturas como lo manifestó la Comisión Europea. Según palabras de la Corte, estas técnicas utilizadas conjuntamente, con premeditación y durante muchas horas, causaron a los que las sufrieron si no verdaderas lesiones, por lo menos intensos sufrimientos físicos y morales; y, además trastornos psíquicos agudos durante los interrogatorios. También consideró que esas técnicas implicaban un carácter degradante por cuanto podían crear en las víctimas sentimientos de temor, de angustia y de inferioridad, susceptibles de humillarles, de envilecerles y de quebrantar en su caso su resistencia física y moral.[19] En una de sus sentencias la CoIDH determinó lo siguiente:

> La Corte Europea de Derechos Humanos ha sostenido que para que un trato sea considerado como inhumano o degradante y, en grado extremo, como tortura, debe alcanzar un mínimo nivel de severidad. La evaluación de este nivel mínimo es relativa y depende de las circunstancias de cada caso, tales como la duración del trato y de sus consecuencias físicas y mentales. Por su parte, en el caso Celebici, la Cámara de Juicio del Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia analizó estándares normativos del derecho Nº 10 Integridad Personal internacional humanitario y de los derechos humanos, con base en los cuales definió trato inhumano o cruel como: […] un acto u omisión intencional, que […] juzgado objetivamente, es intencionado y no accidental, que causa graves sufrimientos o daños mentales o físicos, o constituye un serio ataque a la dignidad humana. La propia jurisprudencia de este Tribunal así como de otros tribunales y autoridades internacionales, llevan a la Corte a concluir que existe una prohibición universal tanto de la tortura como de otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, independientemente de cualquier codificación o declaración, por ser todos estos violatorios de normas perentorias de derecho internacional. Asimismo, la Corte es consciente de la creciente tendencia, a nivel internacional e interno, hacia el reconocimiento del carácter no permisible de las penas corporales, debido a su naturaleza intrínsecamente cruel, inhumana y degradante. Consecuentemente, un Estado Parte de la Convención Americana, en cumplimiento de sus obligaciones derivadas de los artículos 1.1, 5.1 y 5.2 de dicha Convención, tiene una obligación erga omnes de abstenerse de imponer

[19] Cfr. Corte Europea de Derechos Humanos, sentencia del 18 de enero de 1978, párr. 167. En el mismo sentido, cfr. *Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 25 años de jurisprudencia 1959-1983*, Cortes Generales, Madrid, 1981.

> penas corporales, así como de prevenir su imposición, por constituir, en cualquier circunstancia, un trato o pena cruel, inhumano o degradante.[20]

29. Estas consideraciones son relevantes en cuanto ilustran en propio criterio de los precedentes de la CoIDH que son vinculantes para la aplicación del derecho por parte de nuestros propios operadores jurídicos, como parte de las obligaciones derivadas del bloque de constitucionalidad. En efecto, la Corte de San José interpretó lo manifestado por la Corte Europea estableciendo que "aún en la ausencia de lesiones, los sufrimientos en el plano físico y moral, acompañados de turbaciones psíquicas durante los interrogatorios, pueden ser considerados como tratos inhumanos",[21] y más aún, señaló que esa situación se agravó por la vulnerabilidad de una persona ilegalmente detenida. En cuanto a las afectaciones a la integridad psicológica o moral, la cuestión ha sido desarrollada por la jurisprudencia de la Corte Interamericana y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en diversos pronunciamientos. Así, en el caso *Villagrán Morales y otros contra Guatemala*, conocido como el caso "de los Niños de la calle", el tribunal realizó el siguiente razonamiento:

> Debe tenerse presente que los jóvenes fueron retenidos clandestinamente por sus captores entre 10 y 21 horas. Este lapso medió entre dos circunstancias de extrema violencia: la aprehensión forzada y la muerte por impactos de arma de fuego en estado de indefensión, que el Tribunal ya ha declarado probadas (…). Es razonable inferir, aunque no mediaran otras evidencias al respecto, *que el trato que recibieron durante esas horas fue agresivo en extremo*. Durante el tiempo de su retención los cuatro jóvenes permanecieron aislados del mundo exterior y seguramente estaban conscientes de que sus vidas corrían grave peligro. *Es razonable inferir que durante esas horas pasaron, por esa sola circunstancia, por una situación de extremo sufrimiento psicológico y moral.*[22]

30. La jurisprudencia de la CoIDH también reconoció, en diversas oportunidades, las consecuencias psicológicas de los familiares de las víctimas de violaciones graves de los derechos humanos y declaró la violación del derecho a la integridad psíquica y moral,[23] especialmente en el caso de los "familiares directos" (el tribunal aplicó una presunción iuris tantum respecto de madres y padres, hijas e hijos, esposos y esposas, compañeros y compañeras permanentes). En este último supuesto, corresponde al Estado desvirtuar esa presunción de que las violaciones a los derechos de las víctimas indirectas derivadas de los tratos crueles, inhumanos o degradantes, no tuvieron un efecto negativo en las víctimas. Resulta interesante mencionar, que en uno de los últimos casos resueltos por la Corte, una vez constatada la forma y las circunstancias en que la víctima fue privada de la vida, destacó que "la falta de efectividad de las medidas adoptadas para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables, provocaron en sus familiares directos sufrimiento y angustia, además de un sentimiento de inseguridad, frustración e impotencia ante la abstención de las autoridades públicas de investigar los hechos, afectando, por lo tanto, su integridad psíquica y moral".[24]

31. Finalmente, en este campo la CoIDH también tuvo ocasión de pronunciarse sobre la imposición de castigos a las personas privadas de la libertad. En este caso, el tribunal internacional consideró que:

> En atención a la regulación y aplicación de las penas corporales […], la Corte considera que la naturaleza misma de éstas refleja una institucionalización de la violencia que, pese a ser permitida por la ley, ordenada por las autoridades

---

[20] Cfr. *Caso Caesar vs. Trinidad y Tobago*. Sentencia 11 de marzo de 2005, párrs. 67-74.
[21] Corte Interamericana de Derechos Humanos, *Caso Loayza Tamayo*, párr. 57; y también *Castillo Petruzzi y otros vs. Perú*, del 30 de mayo de 1999, párr. 197.
[22] Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, *Caso Villagrán Morales y otros vs. Guatemala* ("Niños de la Calle"), del 19 de noviembre de 1999, párrs. 162 y 163.
[23] Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, *Caso Blake vs. Guatemala*, del 24 de enero de 1998, párr. 114; *Bámaca Velásquez vs. Guatemala*, del 25 de noviembre de 2000; *Villagrán Morales y otros*, ya citado; *Heliodoro Portugal vs. Panamá*, del 12 de agosto de 2008, párr. 163 y *Valle Jaramillo y otros vs. Colombia*, del 27 de noviembre de 2008, párr. 119.
[24] Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, *Caso Valle Jaramillo y otros*, ya citado., párr. 119 y *Kawas Fernández vs. Honduras*, del 3 de abril de 2009, párr. 128.

> judiciales y ejecutada por las autoridades penitenciarias, constituye una sanción incompatible con la Convención. Como tales, las penas corporales por medio de flagelación constituyen una forma de tortura y, en consecuencia, una violación *per se* del derecho de cualquier persona sometida a la misma a que se respete su integridad física, psíquica y mental, en los términos del artículo 5.1 y 5.2 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma. En consecuencia, la Ley de Penas Corporales debe ser considerada contraria a los términos del artículo 5.1 y 5.2 de la Convención Americana.[25]

32. Hasta ahora el esquema argumental seguido por la Comisión se ha centrado en las disposiciones conformadoras del sistema interamericano de protección de los derechos fundamentales en lo que hace al tema de la prohibición de los tratos crueles, inhumanos o degradantes y a las obligaciones que derivan para los agentes de la autoridad en relación con esa prohibición absoluta. Sin embargo, desde luego que también en el ordenamiento nacional se encuentran sendas disposiciones al respecto. Así, conforme a la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes se pretende articular un sistema que vincule a todas las autoridades mexicanas en relación con la prohibición absoluta, adecuada investigación y adecuada sanción a los responsables de incurrir en esta clase de actos ilícitos. Por ello, desde el artículo 2º de dicha Ley se determina que sus objetivos estarán centrados en:

- Establecer la distribución de competencias y la forma de coordinación entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno para prevenir, investigar, juzgar y sancionar los delitos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes;
- Establecer los tipos penales de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y sus sanciones; las reglas generales para su investigación, procesamiento y sanción, así como las normas aplicables ante la comisión de otros delitos vinculados;
- Establecer medidas específicas de atención, ayuda, asistencia, protección integral y reparación para garantizar los derechos de las Víctimas de los delitos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

33. Por supuesto que la aplicación de tal normatividad corresponde –en términos de su artículo 3º– a las autoridades de los tres órdenes de gobierno en el ámbito de sus respectivas competencias, y se interpretará de conformidad con la Constitución y el derecho internacional, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia de los derechos de las personas víctimas de tortura o tratos crueles inhumanos o degradantes. En especial, es importante destacar que el contexto de acaecimiento de los delitos previstos por la Ley General en comentario hace referencia a la conjunción de tres factores que evidencian cómo los actos de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes son delitos relacionados con la acción predominante de los agentes de la autoridad pública en contextos relacionados con el internamiento o la privación de la libertad –sea de manera legal o no– de las personas. En efecto, en la Ley se destaca que los delitos previstos y sancionados en esa sede se cometen con mayor incidencia en:

- Lugares para la privación de la libertad; esto es, en los establecimientos, las instalaciones o cualquier otro espacio o sitio en control de las autoridades federales, estatales o municipales en donde se encuentren o pudieran encontrarse personas en privación de la libertad, medie o no orden, medida cautelar o sentencia de una autoridad judicial o mandato de una autoridad administrativa u otra competente; así como establecimientos, instalaciones o cualquier otro sitio administrado por particulares, en los que se encuentren personas privadas de la libertad por determinación de la autoridad o con su consentimiento expreso o tácito.
- Por lo tanto, los delitos previstos en esta ley ocurren preponderantemente –aunque, desde luego, no en forma única ni conceptualmente necesaria– en contextos de

[25] Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, *Caso Caesar vs. Trinidad y Tobago*, del 11 de marzo de 2005 ya citado.

privación de la libertad, que debe entenderse como cualquier acto en el que se prive a una persona de su libertad deambulatoria que derive en alguna forma de retención, detención, presentación, aprehensión, internamiento, aseguramiento, encarcelamiento o de custodia de una persona, por orden o acto de autoridad judicial o administrativa u otra competente, o con el consentimiento expreso o tácito de cualquiera de éstas.

— Se enfatiza, además, que estos delitos son cometidos por Servidores Públicos, es decir, toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública Federal, de las entidades federativas, municipal y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, incluyendo las administraciones centralizadas, los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, organizaciones y sociedades asimiladas a éstas, empresas productivas del Estado, fideicomisos públicos considerados entidades paraestatales, en los órganos constitucionales autónomos, en el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, o en los poderes judiciales federales y de las entidades federativas.

34. En ese tenor, además del ilícito penal de tortura, ya distinguido en función de la especial entidad, morfología y fines de los actos lesivos de la integridad personal, la Ley General a comentario prevé la existencia de un ilícito penal autónomo consistente en el delito de tratos crueles, inhumanos o degradantes. Según el artículo 29 de la Ley:

> **Artículo 29.** Al servidor público que en el ejercicio de su encargo, como medio intimidatorio, como castigo o por motivos basados en discriminación, veje, maltrate, degrade, insulte o humille a una persona, se le aplicará una sanción de tres meses a tres años de prisión y hasta doscientos días multa.

35. Lo expuesto evidencia que los tratos crueles, inhumanos o degradantes tienen una doble faz que no puede ser soslayada en esta sede. En primer lugar, se configuran como auténticos hechos violatorios de derechos fundamentales. En este sentido, ellos son aptos para configurar la responsabilidad internacional del Estado como principal garante para su tutela en el marco de los mecanismos regionales (o universales) de protección. Sin embargo, por otro lado, considerados desde el ámbito del derecho interno, la comisión de actos de semejante talante en perjuicio de las personas comporta, tanto un acto contrario al orden constitucional que debe ser investigado y reparado; y también supone, para sus perpetradores –sean autores o partícipes– una fuente de responsabilidad penal y administrativa que debe determinarse con arreglo a las leyes aplicables en la sede interna. Desde luego, en función de las atribuciones constitucionales y legales con las que cuenta esta Comisión, importa sobre todo destacar el primer aspecto del acto ilícito; es decir, el que tiene que ver con la conculcación de los derechos fundamentales, aunque las consideraciones vertidas en este instrumento tengan, por lo demás, también un efecto indirecto en la determinación de las otras responsabilidades conducentes.

36. Lo anterior, se corrobora por lo señalado en diversos precedentes emitidos por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde se estableció que la investigación de posibles actos de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes debe realizarse de oficio y de forma inmediata; además será imparcial, independiente y minuciosa, con el fin de: i) determinar la naturaleza y origen de las lesiones advertidas; ii) identificar a los responsables; e, iii) iniciar su procesamiento. En este contexto, corresponde a la autoridad en cualquier nivel garantizar los derechos de las personas sometidas presuntamente a este tipo de trato, lo que implica la obtención y el aseguramiento de toda prueba que pueda acreditar los actos de tortura alegados; de ahí que el Estado debe garantizar la independencia del personal médico y de salud encargado de examinar y prestar asistencia a los detenidos, de forma que puedan practicar libremente las evaluaciones médicas necesarias, respetando las normas establecidas en la práctica de su profesión. Así, cuando una persona alega alguna clase de tortura o tratos crueles, los Estados tienen la obligación de verificar, en primer lugar, la veracidad de dicha denuncia, a través de una investigación llevada a cabo con la debida diligencia, para lo cual, la regla de exclusión de pruebas obtenidas bajo coacción (incluyendo tortura y tratos o penas crueles, inhumanos o

degradantes), constituye un medio necesario para desincentivar el uso de cualquier modalidad de coacción, donde la carga de la prueba de este tipo de hechos recae en el Estado, por lo que no es válido argumentar que el denunciante no probó plenamente su denuncia para descartarla, sino que será el Estado quien deba demostrar que regularidad de las acciones emprendidas, por ejemplo, cuando una persona está privada de la libertad y debe rendir declaración sobre algún hecho que se le imputa, ya sea que se trate de un delito o de una falta diversa.[26]

37. Esto comporta una especial relevancia en cuanto a un aspecto procesal relacionado con la carga de la prueba, pues en estos casos corresponde a la autoridad demostrar la regularidad de su actuación y no al gobernado demostrar que los actos donde se le infringieron lesiones o perturbaciones a su integridad, física, moral o psicológica fueron apegados a derecho. Así de acuerdo con otros precedentes de los Tribunales Federales se desprende el reconocimiento de los criterios orientadores emitidos por la CoIDH en el sentido de que el Estado es responsable, en su condición de garante de los derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la observancia del derecho a la integridad personal de todo individuo que se halla bajo su custodia. Por lo que existe la presunción de considerar responsable al Estado por las torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes que exhibe una persona que ha estado bajo la custodia de agentes estatales, si las autoridades no han realizado una investigación seria de los hechos seguida del procesamiento de los que aparezcan como responsables de tales conductas. Así las cosas, los criterios emitidos por las instancias internacionales, dan pauta objetiva para considerar que la carga de la prueba para conocer la causa que originó las lesiones que presenta en su cuerpo una persona que fue detenida por la policía, recae en el Estado y no en los particulares afectados; sobre todo, si a esos criterios se les relaciona directamente con los principios de presunción de inocencia (que implica que el justiciable no está obligado a probar la licitud de su conducta cuando se le imputa la comisión de un delito, pues en él no recae la carga de probar su inocencia, sino más bien, es al Ministerio Público a quien incumbe probar los elementos constitutivos del delito y de la responsabilidad del imputado); y, *pro homine* o *pro personae* (que implica efectuar la interpretación más favorable para el efectivo goce y ejercicio de los derechos y libertades fundamentales del ser humano).[27]

38. La carga de la prueba contra el Estado, es decir, contra la autoridad pública que eventualmente incumplió su deber de salvaguardar la integridad personal de las personas privadas de su libertad, es más acusada cuando, como en la especie, no solo no se realizó en la sede administrativa alguna investigación autónoma para el esclarecimiento de los hechos; sino, sobre todo, cuando no se cuenta con ningún elemento para verificar el estado en que se encontraban las personas detenidas al momento de ingresar a los lugares destinados a permanecer durante la privación de la libertad. En este sentido, la Comisión destaca la vinculación que existe entre la falta de constancias sobre la integridad de los afectados por los actos presuntamente violatorios de derecho y la acreditación de los hechos consistentes en los tratos crueles, inhumanos o degradantes. En el caso, las autoridades municipales fueron omisas en cuanto a que dejaron de atender a las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en 1955, y aprobadas por el Consejo Económico y Social en sus resoluciones 663C (XXIV) de 31 de julio de 1957 y 2076 (LXII) de 13 de mayo de 1977. Si bien estas reglas parecerían aplicar solamente para las privaciones de la libertad derivadas de procedimientos penales, en la definición de su ámbito de aplicación se destaca que “la primera parte de las reglas trata de las concernientes a la administración general de los establecimientos penitenciarios y es aplicable a todas las categorías de reclusos, criminales o civiles, en prisión preventiva o condenados, incluso a los que sean objeto de una medida de seguridad o de una medida de reeducación ordenada por el juez”.

39. Así las cosas, en el primer apartado de las reglas de la sección general, se contiene la disposición 22.1 según la cual “todo establecimiento penitenciario dispondrá por lo menos de

---

[26] Cfr. *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Libro 15, febrero de 2015, tomo II, p.1425.
[27] Cfr. *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Libro 3, febrero de 2014, tomo III, p. 2355.

los servicios de un médico calificado que deberá poseer algunos conocimientos psiquiátricos. Los servicios médicos deberán organizarse íntimamente vinculados con la administración general del servicio sanitario de la comunidad o de la nación. Deberán comprender un servicio psiquiátrico para el diagnóstico y, si fuere necesario, para el tratamiento de los casos de enfermedades mentales". Por tanto, la regla 24 determina, en consonancia con lo expuesto, que "el médico deberá examinar a cada recluso tan pronto sea posible después de su ingreso y ulteriormente tan a menudo como sea necesario, en particular para determinar la existencia de una enfermedad física o mental, tomar en su caso las medidas necesarias; asegurar el aislamiento de los reclusos sospechosos de sufrir enfermedades infecciosas o contagiosas; señalar las deficiencias físicas y mentales que puedan constituir un obstáculo para la readaptación, y determinar la capacidad física de cada recluso para el trabajo".

40. Con base en lo señalado en estas dos reglas, tan pronto como una persona sea puesta a disposición de la autoridad, deberán practicársele los exámenes necesarios a fin de certificar la integridad física e, incluso, con base en los resultados obtenidos, cerciorarse de si alguno de los sujetos privados de la libertad cuenta con lesiones que no encuentren explicación razonable en virtud de alguna mecánica de hechos precedente. Este procedimiento ordenado por el derecho aplicable según la Organización de las Naciones Unidas y su Consejo Económico y Social, es un medio adecuado para preservar la seguridad e integridad personal de los sujetos sometidos a alguna clase de reclusión sea por razón de la comisión de un delito o la imposición de una sanción administrativa, pero también es un mecanismo de garantía para las autoridades, pues ante la imputación posterior de algún acto de tortura o de tratos crueles, inhumanos o degradantes, pesará sobre los agentes públicos la carga de probar la regularidad de sus conductas.

41. En el caso concreto, estas normas disciplinaban la actuación de los elementos policiacos una vez que las personas fueron puestas a disposición de la justicia municipal. Esto es, en aplicación del imperativo de legalidad y acorde con sus responsabilidades legales y constitucionales, una vez que los detenidos son puestos a disposición de las autoridades administrativas municipales, invariablemente debe actuarse de forma oportuna para lograr la certificación del estado de salud de las personas al momento de la detención. En el caso, se procedió en forma omisa y con ello se concretó, una vez más, un comportamiento que se aparta del imperativo de legalidad y que se tradujo en una afectación a la integridad personal de los detenidos.

IV. Acreditación de las violaciones a los derechos fundamentales.

A. Delimitación inicial

42. Después de haber sentado las consideraciones anteriores en relación con las normas y disposiciones fundamentales de carácter constitucional y convencional que resultan relevantes, la Comisión está en condiciones de entrar al estudio de las violaciones acreditadas en la especie.

43. No obstante, este Organismo estima pertinente aclarar que los únicos hechos relevantes para la investigación de la queja son los que desencadenaron la investigación oficiosa que derivó en la presente recomendación. En efecto, la Comisión está obligada a pronunciarse respecto de cualquier presunta violación a los derechos humanos de que tenga conocimiento, con independencia del momento histórico en el que haya ocurrido, con tal de que la noticia de la misma sea directamente contemporánea al inicio de la investigación. En el caso, si bien los hechos referidos en la grabación ocurrieron aproximadamente en 2015, lo cierto es que se tuvo conocimiento público de ellos hasta el 30 de noviembre de 2020, por lo que justo hasta ese momento la Comisión estuvo en condiciones de iniciar el expediente en que se actúa. Así las cosas, durante la instrucción del expediente, una defensa recurrente de las autoridades consistió en señalar que los hechos dados a conocer a través de los medios de comunicación y por los cuales la Comisión abrió este expediente de manera oficiosa, ocurrieron durante administraciones municipales pasadas. Señalaron también que los elementos de policía que intervienen en la grabación ya no forman parte de las

corporaciones de seguridad al haber sido dados de baja por no acreditar las pruebas de control y confianza. No obstante, como ya se ha aclarado en apartados precedentes, todo ello es insuficiente para excluir la responsabilidad de los agentes del Estado que participaron en los sucesos materia de la investigación.

44. En consecuencia, es verdad que durante los actos de investigación diversos participantes (entre ellos la madre de la víctima directa de los tratos inconstitucionales) refirió que se trataba de una persona problemática, que incluso se encontraba interno en un centro de rehabilitación contra las adicciones. Empero, el hecho de que se trate de una persona con estas características o que, incluso, frecuentemente se halle en conflicto con la ley, no es razón justificativa suficiente para demeritar las consideraciones que la Comisión verterá en este apartado. Como se ha explicado con anticipación, los derechos fundamentales presentan un efecto de irradiación que impregna todas las áreas del ordenamiento. Este mismo efecto supone que las declaraciones de derechos presentan una faceta objetiva al tenor de la cual sus efectos deben ser observados a pesar de que sus titulares sean descuidados con sus propios bienes jurídicos o que, incluso, se muestren reticentes con la promoción de sus mecanismos de defensa y garantía. La dimensión objetiva de los derechos supone que aun cuando sus titulares permanezcan en la ociosidad y no activen ninguna vía para reclamar las violaciones de que hayan sido víctimas. Eso explica, en principio, la posibilidad de activar procedimientos ante esta Comisión de manera oficiosa y, que, ahora, nada obste para producir una recomendación de fondo con total prescindencia de la participación directa del sujeto que resintió las afectaciones en su esfera jurídica.

45. Las salvedades anteriores son relevantes por dos motivos. En primer lugar, porque delimitan las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos donde ocurrieron las violaciones investigadas por la Comisión. En suma, se trata de concentrarse solo en los hechos relevantes para depurar la materia de la controversia iusfundamental solo a las manifestaciones de la conducta realizada por los agentes de la autoridad que significó una intromisión injustificada en los derechos de las víctimas. Y, por otra parte, definir en estos términos la amplitud fáctica del examen supone la elaboración de una regla de método a tenor de la cual se dibujan con claridad las comarcas competencias propias de la Comisión de aquellas diversas donde solo distintas autoridades judiciales o ministeriales pueden intervenir, tal como ya se ha aclarado con oportunidad en el apartado 3 del parágrafo anterior.

B. Los hechos relevantes

46. Establecidas las salvedades del apartado previo, se entrará al estudio de los hechos relevantes del caso.

47. El hecho desencadenante de la investigación consistió en el video publicado en fecha 30 de noviembre de 2020, como parte de las notas periodísticas publicadas por el informativo “Imagen”, en la cual se indica de la filtración de un video en el que se ve a oficiales de la Policía municipal de Juchipila, Zacatecas, golpeando a uno de los dos detenidos en el interior de los separos. En dicha nota, se refiere que, a una de estas personas, le obligaron a quitarse los zapatos, e incluso, en el video se escucha decir a uno de los policías: “a éste le apestan las patas”. El video muestra a uno de los detenidos tirado en el piso y, posteriormente, le dan la orden de que se levante. Asimismo, el sujeto pide que lo dejen en paz y el oficial le responde: “Por eso, deja termino para dejarte en paz”. En esto, además, se observa que uno de los hombres es arrinconado en una pared, donde al parecer es golpeado, ya que se escuchan los quejidos y la reiterada petición de que lo dejen en paz. Finalmente, se aprecia que este mismo sujeto es tirado al piso, y luego se observa cómo los oficiales lo patean.

48. Esta información se corroboró por la inspección del video que realizó el personal de esta Comisión durante la integración del expediente. El video referido permite advertir la participación de cuando menos tres sujetos. Por la mecánica de los hechos, dos de ellos pertenecen a la corporación de Seguridad Pública Municipal de Juchipila y, el tercero, al

parecer es una persona privada de la libertad en los separos de la corporación. Las imágenes denuestan que se encuentra de pie, con calcetines, y por el lado derecho se observa como recibe una patada directa a los pies, la cual, a causa de su mala postura, lo hace caer al suelo. En ese momento, se aprecia que la persona que lo tumba porta botas color negro y pantalón oscuro, al caer al suelo, boca arriba e inclinado un poco hacia el costado derecho, se enfocan los pies de otra persona con botas negras y pantalón oscuro semejante a los del primero, por lo que puede colegirse que ambos sujetos se encontraban uniformados, como ocurre naturalmente con los elementos policiacos en servicio. Momentos después, la cinta permite advertir que, en efecto, los sujetos que participan en los hechos están uniformados y son elementos de policía. En la certificación se refiere literalmente que "la cámara enfoca medio cuerpo de los masculinos en los que se aprecia que la ropa que traen es uniforme de policía preventiva, uno de ellos con arma larga". En el ínterin se aprecia también que los elementos pretenden tomarle una fotografía al detenido mientras se encentra en el suelo, al grado de que, en reiteradas veces, le piden que levante la cabeza, mientras que la víctima les reitera su ruego de que lo dejen en paz. En ese momento, "la cámara enfoca a la víctima a la cara y atrás de él se ve un oficial, que no se alcanza a distinguir con exactitud por lo rápido que se cambia la cámara, luego forcejea el oficial con la víctima y lo tumban al suelo, se escucha un golpe y los gritos de la víctima", luego una voz vuelve a referir "a ver si se le baja el pinche olor a patas al güey", la cámara sigue enfocando el piso y los pies de los oficiales que se observa que salen de la celda".

49. La investigación demostró que los hechos son verídicos, aunque no contemporáneos a la difusión de la noticia. Según la comparecencia del Director de Seguridad Pública del municipio de Juchipila, el video fue tomado en el año 2015, durante la administración del presidente municipal **FELIPE IBARRA ENRÍQUEZ**. En ese momento, el comandante de la corporación era **AR1**, quien a la fecha ya no es oficial de seguridad, pero continúa desempeñándose como chofer de la presidencia. En esa actuación se refirió también, que uno de los elementos que se aprecian en la grabación, era el referido comandante **AR1** y que quien tomó las imágenes fue el director de la corporación **AR2**.

50. Esta información se corroboró por la declaración de **T2**, quien en su comparecencia señaló que la víctima era conocida por el sobrenombre de "[…]", quien había ingresado a los separos acusado de robo. El declarante agregó que en el video, los elementos intervinientes "le querían tomar una foto" al detenido y que los participantes en los hechos eran el oficial **AR3** y **AR1**. Sostuvo, además, que "**AR3** ya no trabaja con nosotros y **AR1** sigue trabajando como chofer; de recién que salió el video me encontré por la calle a **AR3** y le pregunté de ese video y me dijo que solo le querían tomar una foto al detenido, pero no se dejaba; cuando yo vi el video inmediatamente reconocí las voces de mis compañeros Pablo e Isaías".

51. Con posterioridad, a causa de la entrevista con **T1,** madre del detenido que aparece en la grabación, esta Comisión pudo conocer que la persona detenida que aparece en las imágenes del video es **VD**, quien es conocido por el sobre nombre de "[…]". Asimismo, la declarante manifestó que actualmente, "su hijo no se encontraba en casa, ya que éste se encontraba internado en un centro de rehabilitación en la ciudad de Guadalajara, refiere que no recuerda el nombre del centro, pero señaló que en esta semana hablaron al centro y les dijeron que estaba mucho mejor, que incluso ya estaba tranquilo y gordito, refiere que su hijo tiene 11 meses internado y que para el mes de febrero ajustaría un año, por lo que considera que ese video del que nos referimos no es reciente, ya que su hijo tiene mucho internado en el centro de rehabilitación, señalando que dejara en el centro a su hijo por más tiempo, pues tiene miedo de que vuelva a las andadas y que lastime a la familia".

52. Por otro lado, hasta en dos ocasiones diversas, el personal de este Organismo pudo entrevistarse con **AR1**. En la primera comparecencia, el mencionado señaló desconocer la acusación que le hace el periódico Imagen, pues era el caso que tiene poco más de cuatro años aproximadamente que dejó de laborar en la policía municipal, ya que aproximadamente desde 2016, desempeña el cargo de chofer y en obras públicas, por lo tanto, es imposible que él estuviera fungiendo como elemento de la policía municipal en la fecha que se establece en el periódico. Sin embargo, en su segunda comparecencia, agregó lo siguiente:

“como lo dije en mi declaración no recuerdo los sucesos, lo que sí observé en el video es que se trataba de los separos preventivos anteriores es decir los que se ubicaban a un costado de la presidencia municipal, no recuerdo cuanto tiempo se tiene en los separos actuales, no sé qué tan nuevo o viejo sea este video, yo dure como policía 8 años y en el mes de julio del 2016, deje de desempeñarme como policía.”

53. En relación a esos medios de prueba, la Comisión estima que son aptos para generar convicción respecto de los hechos narrados en ellos. Respecto del informe rendido por el Presidente Municipal, se trata de un de documento suscrito por un funcionario en ejercicio de sus atribuciones de derecho público que, además, en cuanto a su contenido, resulta corroborado en lo esencial por la propia versión de los hechos narrada por los demás intervinientes en los hechos, tal como obra en las declaraciones trascritas en el apartado V de esta recomendación. Finalmente, las declaraciones de los elementos policiales expresadas durante la comparecencia, se realizaron ante un funcionario investido de fe pública conforme al artículo 149 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, lo cual hace prueba plena de que esas manifestaciones se produjeron sin coacción y con pleno conocimiento de su sentido y consecuencias.

54. Así las cosas, en relación con los hechos relevantes atribuidos a los elementos policiacos, la Comisión estima probados los siguientes enunciados fácticos:

- ***i.*** Los hechos visibles en la grabación difundida por diversos medios de comunicación ya sea de manera visual o escrita, ocurrieron en las instalaciones de los separos de la Policía Municipal de Juchipila. Las declaraciones permiten arribar a la conclusión de que se trató de las instalaciones previas a las que actualmente ocupa ese lugar para la privación de la libertad de las personas, las cuales se inspeccionaron como parte de las diligencias de investigación.
- ***ii.*** Los hechos ocurrieron en algún momento de 2015, durante la administración municipal del alcalde Felipe Ibarra Enríquez.
- ***iii.*** Los actos que constan en el video fueron perpetrados por dos elementos de la policía preventiva de Juchipila, quienes luego de las averiguaciones fueron identificados como el comandante **AR1** y **AR3**.
- ***iv.*** **AR1** dejó de pertenecer a la policía municipal en julio de 2016, aunque siguió desempeñándose como servidor público en diversas áreas de la administración municipal (como personal de cuadrilla en obras públicas y chofer en el sistema municipal DIF), ya que al momento de la investigación fungía como chofer adscrito a la oficina del presidente municipal.
- ***v.*** En la actualidad, **AR3**dejó de pertenecer a la corporación de seguridad del municipio y, de las averiguaciones, no se advierte que ostente algún cargo público.
- ***vi.*** La grabación fue registrada aparentemente por **AR2**, quien en ese entonces se desempeñaba como Director de la Policía de Juchipila y por **AR1**.
- ***vii.*** La persona detenida que se observa en la grabación se identificó como **VD**, conocido por el sobrenombre de “[…]”, quien había ingresado a los separos de la policía al haber sido acusado de robo. Fue en esa ocasión cuando se tomó la videograbación que dio motivo a este expediente.
- ***viii.*** Al momento de la investigación, se aseveró que **VD**, llevaba alrededor de 11 meses internado en un centro de rehabilitación contra las adicciones en Guadalajara.
- ***ix.*** Los sucesos registrados en la videograbación demostraron que los elementos **AR1** y **AR3** golpearon y maltrataron a **VD** mientras se encontraba interno en los separos de la policía, estos tratos se concretaron por medio de puntapiés, caídas al suelo, jaloneos y uso de la fuerza para someter la voluntad del detenido. Además, consta que se obtuvieron fotografías de él mientras era maltratado y mientras los elementos se referían a él con expresiones vulgares y homofóbicas como “puto”, o bien, mientras hacían escarnio sobre el presunto mal olor de sus pies, que reiteradamente se menciona por los elementos participantes mientras el detenido **VD** les pide que lo dejen en paz.

55. Los hechos probados en relación con la actuación de los elementos policíacos son una reconstrucción coherente y consistente con las constancias del expediente. Ellos permiten

apreciar los hechos en forma lógica, de tal modo que muestran con claridad el momento donde se consumaron las violaciones de derechos del detenido. Para estos efectos conviene enderezar las siguientes consideraciones.

- *Consumación de los tratos crueles, inhumanos o degradantes*

56. Con base en los enunciados sobre los hechos que se estiman probados en la especie, esta Comisión puede concluir que **VD** fue víctima de tratos crueles, inhumanos o degradantes a manos de los elementos de la policía municipal de Juchipila, de nombres **AR1** y **AR3**. También se estima que existen elementos suficientes para considerar que, el entonces director de la corporación de seguridad pública **AR2,** omitió emprender las acciones necesarias para evitar que estos actos violatorios de derechos fundamentales y, en sí mismos constitutivos de delito, se consumaran dentro de las instalaciones municipales en contra de la víctima directa de ellos. Es verdad que durante la instrucción del procedimiento se allegaron indicios que indican que fue este último quien tomó (junto con otro de los implicados) las imágenes difundidas en los medios de comunicación y, que a la postre, originaron la apertura oficiosa de esta queja. No obstante, con independencia de que ello sea así, bastaría la actualización de hechos semejantes para que los superiores de la corporación municipal que toleraron por acción u omisión la actualización de las violaciones a derechos fundamentales, deben considerarse responsables de aquellos, pues en este caso aquellos reportan una posición de garante derivada de su relación de mando y jerarquía dentro de la estructura policial.

57. Ahora bien, por lo que hace a la conducta de los elementos **AR1** y **AR3**, se estima que éstos son los directamente vinculados con la violación. En efecto, según se pudo advertir en la investigación, el testimonio de los compañeros de trabajo de los mencionados es consistente en señalar que las voces que se escuchan en las grabaciones, pertenecen a estos dos servidores públicos, aunado a que en las declaraciones consta que fueron estos dos elementos quienes tuvieron contacto con la víctima durante su detención en los separos de la policía municipal. Fue durante esa privación de la libertad que los elementos golpearon, insultaron y agredieron psicológicamente al detenido **VD**. Estos actos contrarios a derecho, se cristalizaron en puntapiés, palabras insultantes y homofóbicas, insultos a su aspecto y apariencia personal y en la insistencia para que el detenido mostrara la cara para tomarle fotografías que no tenían ninguna razón legal. Además, la sola existencia de una grabación donde se muestra el maltrato del detenido, la cual aparentemente fue tomada por el director de la corporación **AR2** sin que existiera ninguna razón o justificación legal para ello, es muestra de la posición de sometimiento y sorna de la que fue objeto el detenido. Los golpes, puntapiés y demás aflicciones físicas que se aprecian en la grabación son manifestación tangible de las afectaciones que el detenido sufrió en su integridad física. Por el contrario, las palabras insultantes y el estado de cosas tendiente a menoscabar la dignidad de la persona detenida, evidencian la manera en la cual durante la privación de la libertad **VD** fue sometido a tratos que no corresponden con los estándares de protección propios de los derechos fundamentales, pues no existía otra finalidad más que menoscabar la integridad moral y psicológica del detenido, afectando el estatuto mismo de persona y negándole, en ese caso, la posibilidad de ser tratado conforme con su personalidad, incluso en el momento de ser imputado –si así hubiere sido– de un delito.

58. En suma: no existe explicación razonable ni justificación alguna para los tratos a los que fue sometido **VD** durante su detención. Por el contrario, los hechos que constan en la grabación tomada en cuenta como base para la investigación, evidencian que toda la mecánica de sucesos relevantes tuvo como única finalidad mostrar la superioridad física de los elementos policiales en un contexto donde el detenido no podía oponer resistencia ni defenderse sin soportar una reacción violenta contra su integridad y patrimonio moral de carácter más intenso por parte de sus agresores directos **AR1** y **AR3.** Pero no solo amén de la superioridad física, la acción conjunta de los elementos tuvo un claro propósito intimidatorio, esto se demuestra a través del léxico empleado por los elementos, el cual evidencia un tono ofensivo y peyorativo hacia el detenido, centrado en enfatizar su inferioridad y marginación en toda la circunstancia concreta. Así, si como se ha analizado

previamente, existe una prohibición absoluta para cometer tratos crueles, inhumanos o degradantes que forma parte del *ius cogens* internacional, entonces no puede justificarse bajo ninguna consideración el actuar de los elementos policiales que afectó de manera personal y directa el derecho de **VD** a que se respetara su integridad personal al no ser sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes.

- *Falta de certificación del estado de salud de la persona privada de la libertad*

59. Corresponde ahora entrar al estudio de una segunda cuestión cuyas premisas normativas también ya resultan conocidas. En efecto, conforme se ha dicho, las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, establecen un conjunto de deberes a cargo del Estado que debe observar invariablemente en todos los casos donde se trate de una privación de la libertad decretada en contra de una persona. En el caso, no se prejuzgan los motivos que haya tenido la autoridad para ordenar la captura de **VD**, quien según se dice entró a los separos de la policía municipal porque estaba acusado de robo. Es decir, aquí no se calificará si la detención fue ordenada con base en los criterios constitucionales o legales para la determinación de una detención legal. En esencia, esto podría ser en sí mismo constitutivo de una violación a los derechos fundamentales del detenido, en razón a la temporalidad transcurrida, y a la imposibilidad de atribuirle a los directamente involucrados, este Organismo se concentró solo en los hechos derivados de la detención ya efectuada, y de los tratos crueles, inhumanos o degradantes que ya se han acreditado y analizado en el inciso anterior, debe considerarse que la autoridad municipal de seguridad pública violó en perjuicio de **VD** los deberes que debía observar al certificar la integridad física del detenido.

60. A tenor de lo ordenado, con base en lo señalado por las Reglas invocadas, tan pronto como el detenido ingresó en los separos de la corporación de seguridad municipal, se debió ordenar que al detenido se le practicarán los exámenes necesarios a fin de certificar la integridad física del consignado e, incluso, con base en los resultados obtenidos, la autoridad pudo estar en condiciones de cerciorarse de cuál era el estado en que se encontraba el detenido. Este procedimiento ordenado por el derecho aplicable según la Organización de las Naciones Unidas y su Consejo Económico y Social, es un medio adecuado para preservar la seguridad e integridad personal de los sujetos sometidos a alguna clase de reclusión sea por razón de la comisión de un delito o la imposición de una sanción administrativa. En el caso concreto, estas normas disciplinaban la actuación las autoridades municipales de seguridad una vez que se recibe la consignación de cualquier detenido. Esto es, en aplicación del imperativo de legalidad y de preservación de la integridad física de las personas, debió haber actuado en forma oportuna para lograr la certificación del estado de salud de **VD** al momento de su ingreso en los separos, empero esto no se hizo así y con ello se concretó, una vez más, un comportamiento que se aparta del imperativo de legalidad y que se tradujo en una afectación a la integridad personal del privado de la libertad.

61. El efecto procesal de semejante omisión se traduce en arrojar la carga de la prueba en contra del Estado, con el propósito de demostrar que las afectaciones a la integridad del detenido que se muestran de manera palmaria en las grabaciones, fueron infringidas ya sea como manifestación de la fuerza legítima, pues, en caso contrario, ellas deben reputarse como actos contrarios a derecho. Esto es precisamente lo que acontece en la especie. La carga de la prueba contra el Estado permite sustentar la conclusión de que la autoridad pública incumplió su deber de salvaguardar la integridad personal de las personas privadas de su libertad. En el caso, no solo no se realizó en la sede administrativa alguna investigación autónoma para el esclarecimiento de los hechos cometidos por los agentes de seguridad; sino, sobre todo, porque no se cuenta con ningún elemento para verificar el estado físico en que se encontraba **VD** al momento de ingresar a los lugares destinados a permanecer durante la privación de la libertad. Como se dijo antes, ahora conviene destacar la vinculación que existe entre la falta de constancias sobre la integridad del detenido y la acreditación de los hechos consistentes en los tratos crueles, inhumanos o degradantes, pues no era el afectado quien tendía que probar que estos ocurrieron, sino que era la

autoridad quien tenía que desvirtuar una presunción en su contra. Como ello no se hizo, aquí estriba una segunda causa que motiva el sentido de la presente recomendación.

❖ *Condiciones de los lugares para la privación de la libertad*

62. En diversos precedentes la CoIDH se ha ocupado de definir los estándares aplicables a los centros destinados para la privación de la libertad de las personas. En este sentido, se ha explicado que en los términos del artículo 5.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal y el Estado debe garantizarle el derecho a la vida y a la integridad personal. En consecuencia, el Estado, como responsable de los establecimientos de detención, es el garante de estos derechos de los detenidos.[28] Así las cosas, de conformidad con ese precepto toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir en situación de detención compatible con su dignidad personal. En otras oportunidades, este Tribunal ha señalado que mantener a una persona detenida en condiciones de hacinamiento, con falta de ventilación y luz natural, sin cama para su reposo ni condiciones adecuadas de higiene, en aislamiento e incomunicación o con restricciones indebidas al régimen de visitas constituye una violación a su integridad personal. Como responsable de los establecimientos de detención, el Estado debe garantizar a los reclusos la existencia de condiciones que dejen a salvo sus derechos.[29]

63. Por lo tanto, de conformidad con el artículo 5.1 y 5.2 de la Convención, toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal. En este sentido, los Estados no pueden invocar privaciones económicas para justificar condiciones de detención que no cumplan con los estándares mínimos internacionales en esta área y no respeten la dignidad del ser humano. Asimismo, la CoIDH ha considerado que la detención en condiciones de hacinamiento, con falta de ventilación y luz natural, sin cama para el reposo ni condiciones adecuadas de higiene, en aislamiento e incomunicación o con restricciones indebidas al régimen de visitas, constituyen una violación a la integridad personal. En ese mismo sentido, las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos establecen criterios básicos para interpretar el contenido del derecho de las personas privadas de la libertad a un trato digno y humano. Esas reglas incluyen, entre otras, la prohibición estricta de las penas corporales, de los encierros en celdas oscuras, así como las normas básicas respecto al alojamiento e higiene. Pero no solo en la sentencia del *Caso Pacheco Teruel y otros Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas* de fecha 27 de abril de 2012 (párrafos 67 y ss), la CoIDH señaló los principales estándares sobre condiciones de los centros de detención y deber de prevención que el Estado debe garantizar en favor de las personas privadas de libertad. En particular sostuvo:

a) el hacinamiento constituye en sí mismo una violación a la integridad personal; asimismo, obstaculiza el normal desempeño de las funciones esenciales en los centros penitenciarios;
b) la separación por categorías deberá realizarse entre procesados y condenados y entre los menores de edad de los adultos, con el objetivo de que los privados de libertad reciban el tratamiento adecuado a su condición;
c) todo privado de libertad tendrá acceso al agua potable para su consumo y al agua para su aseo personal; la ausencia de suministro de agua potable constituye una falta grave del Estado a sus deberes de garantía hacia las personas que se encuentran bajo su custodia;
d) la alimentación que se brinde, en los centros penitenciarios, debe ser de buena calidad y debe aportar un valor nutritivo suficiente;
e) la atención médica debe ser proporcionada regularmente, brindando el tratamiento adecuado que sea necesario y a cargo del personal médico calificado cuando este sea necesario;

[28] Corte Interamericana de Derechos Humanos, *Caso Neira Alegría y otros Vs. Perú. Fondo*. Sentencia de 19 de enero de 1995. Serie C No. 20, párr. 60.
[29] Corte Interamericana de Derechos Humanos, *Caso Tibi Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas*. Sentencia de 7 de septiembre de 2004. Serie C No. 114, párr. 150.

f) la educación, el trabajo y la recreación son funciones esenciales de los centros penitenciarios, las cuales deben ser brindadas a todas las personas privadas de libertad con el fin de promover la rehabilitación y readaptación social de los internos;
g) las visitas deben ser garantizadas en los centros penitenciarios. La reclusión bajo un régimen de visitas restringido puede ser contraria a la integridad personal en determinadas circunstancias;
h) todas las celdas deben contar con suficiente luz natural o artificial, ventilación y adecuadas condiciones de higiene;
i) los servicios sanitarios deben contar con condiciones de higiene y privacidad;
j) los Estados no pueden alegar dificultades económicas para justificar condiciones de detención que no cumplan con los estándares mínimos internacionales en la materia y que no respeten la dignidad inherente del ser humano, y
k) las medidas disciplinarias que constituyan un trato cruel, inhumano o degradante, incluidos los castigos corporales, la reclusión en aislamiento prolongado, así como cualquier otra medida que pueda poner en grave peligro la salud física o mental del recluso están estrictamente prohibidas.

64. Además, la Corte ha establecido que el Estado en su función de garante debe diseñar y aplicar una política de prevención de situaciones críticas que pondría en peligro los derechos fundamentales de los internos en custodia. En este sentido, el Estado debe incorporar en el diseño, estructura, construcción, mejoras, manutención y operación de los centros de detención, todos los mecanismos materiales que reduzcan al mínimo el riesgo de que se produzcan situaciones de emergencia o incendios y en el evento que se produzcan estas situaciones se pueda reaccionar con la debida diligencia, garantizando la protección de los internos o una evacuación segura de los locales. Entre esos mecanismos se encuentran sistemas eficaces de detección y extinción de incendios, alarmas, así como protocolos de acción en casos de emergencias que garanticen la seguridad de los privados de libertad.

65. Así las cosas, el Estado –en cualquiera de sus niveles y con independencia de la causa o la temporalidad por la que con arreglo al derecho se haya decretado la privación de la libertad– debe asegurar las condiciones para que las personas privadas de libertad cuenten con espacios dignos de reclusión. Este deber se incumple cuando, así sea transitoriamente, se les hace vivir en condiciones inhumanas y degradantes, exponiéndolos a un clima de violencia, inseguridad, abusos, corrupción, desconfianza y promiscuidad, propiciada o a manos de los propios agentes de la autoridad, lo cual se traduce en la generación de un estado de cosas donde se impone la ley del más fuerte con todas sus consecuencias.[30]

66. En el caso bajo estudio, esta Comisión estima que existen elementos para considerar que se vulnera el derecho a la integridad de las personas privadas de su libertad en dos momentos distintos:

- En primer lugar, en el momento en que el detenido **VD** fue sometido a los tratos crueles, inhumanos y degradantes que menoscabaron su integridad física. Esto debe considerarse así porque los lugares para la privación de la libertad deben contar con las seguridades necesarias para que las personas internas en ellos, cuenten con los elementos que les garanticen que no serán objeto de actos de molestia por parte de otros internos o de los agentes de la autoridad. En el caso, las agresiones e insultos que quedaron constatados en la grabación se realizaron por los propios elementos que deberían haber preservado el orden y la seguridad durante el encierro y, lo que es más grave, estos hechos acontecieron con la participación de los mandos policiales que, incluso, tomaron parte en la grabación. En consecuencia, no puede estimarse, sino que el Estado incumplió con su deber de asegurar las condiciones para que las personas privadas de libertad cuenten con

[30] Corte Interamericana de Derechos Humanos, *Caso "Instituto de Reeducación del Menor" Vs. Paraguay. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas*. Sentencia de 2 de septiembre de 2004. Serie C No. 112, párr. 170.

espacios dignos de reclusión donde queden exentos de toda clase de maltrato o vejación.

- En segundo término, la Comisión encuentra que los separos de la policía municipal de Juchipila incumplen con los estándares internacionales, aun después de que las instalaciones fueron remodeladas y reubicadas –según se dice en acatamiento a recomendaciones previas de este organismo–. En efecto, durante la inspección realizada por la Visitadora Regional que instruyó el procedimiento *in loco,* se dio fe del acceso permitido por las autoridades de seguridad a las instalaciones de reclusión establecidas. Así se constató que las celdas "se ubican a dos metros de distancia de la base de radios o barandilla, observamos dos celdas, no se encuentran enumeradas, la primera con una dimensión de 4.30 por 4.40 metros, se observa un camastro y sobre éste una cobija, en el extremo derecho se ubica una taza la cual se encuentra con dos medias bardas cubriendo la taza, no cuenta con depósito de agua, y al respecto señaló el Director que cuando hay detenido, les pasan un balde de agua, cuenta con luz natural y por la noche se aluza con la luz del pasillo que cuenta con tres focos; la segunda celda con una dimensión de 3 por 4 metros, al igual que la otra cuenta con camastro y taza de baño, ésta celda se encontró muy sucia, por lo que se le hizo la observación al Director, quien de manera inmediata ordenó se realizara la limpieza". En este sentido, la narración descrita evidencia que durante la reclusión las personas detenidas enfrentan condiciones de falta de sanidad, higiene y acceso a bienes vitales como el agua. El hecho de que el sanitario no cuente con depósito para la descarga del aseo supone una grave restricción injustificada a las condiciones de dignidad y cuidado de la salud que deben garantizarse, cuanto más, durante el encierro. Las necesidades fisiológicas de los detenidos no pueden subordinarse a la participación de los elementos en el exterior quienes les proveen de baldes con agua para evacuar los desechos del retrete. Tampoco se garantiza la salubridad de las celdas, si como se constató en la especie, la limpieza de los separos no se realiza con regularidad. Fue hasta que se constató la presencia del personal de la Comisión que las autoridades dieron la instrucción de limpiar la celda. Para ello no interesa que en el momento la celda haya estado vacía, pues las condiciones de higiene y limpieza deben asegurarse de manera continua y con la calidad adecuada. Así, a juicio de la Comisión, también en este sentido se proyecta una nueva vertiente de violación del derecho a la integridad personal de los reclusos –ahora no solamente actuales, sino también potenciales– del centro de privación de la libertad administrado por la corporación de seguridad pública de Juchipila.

VIII. CONCLUSIÓN DEL CASO.

1. Con base en las pruebas recabadas durante la fase de integración del expediente en que se actúa y que fueron referidas en los apartados anteriores, esta Comisión documentó la existencia de actos violatorios de los derechos fundamentales de **VD**, especialmente de aquellos relacionados con el derecho a la integridad y seguridad personal en su manifestación concerniente no ser objeto de tratos crueles inhumanos o degradantes. La persona señalada, fue víctima de tales contravenciones a su esfera jurídica porque los elementos integrantes de la policía municipal de Juchipila identificados –en el momento de los hechos– como **AR1** y **AR3**, (bajo la aparente aquiescencia en la grabación del entonces el director de la corporación **AR2**), golpearon, insultaron y depararon diversos tratos vejatorios (como la toma de grabaciones y fotografías ilegales o el empleo de epítetos discriminatorios y burlescos en contra del detenido en atención a sus características personales) durante el tiempo que este estuvo detenido en los separos de la policía de aquella municipalidad. Así, las afectaciones al derecho a la integridad personal advertidas en el caso, se proyectan en tres vertientes de afectación: primero, en la comisión de los tratos crueles, inhumanos y degradantes ya mencionados; después, en la falta de observancia de los deberes que las autoridades reportan en relación con todas las personas privadas de la libertad para certificar, en cuanto quedan bajo su disposición, el estado de salud e integridad de los detenidos. En este caso, la omisión de la autoridad tiene el efecto de revertir la carga de la prueba sobre las causas de las afectaciones físicas del detenido, en la forma ya

indicada con antelación. Finalmente, se vulnero el derecho a la integridad –tanto del detenido como de las personas privadas de la libertad en los separos de la policía municipal de Juchipila– en cuando se acreditó que las instalaciones no cuentan con las condiciones de higiene y salubridad necesarias para garantizar la integridad física de los detenidos.

IX. DETERMINACIÓN DE LAS VÍCTIMAS DEL CASO

1. Tal como lo ha hecho la Comisión en una larga serie de precedentes, en este acto procederá a determinar quiénes son las víctimas del caso. En relación con dicha determinación bien puede echarse mano de las nociones perfiladas por la CoIDH a lo largo de su jurisprudencia. Según el tribunal regional, la noción de "víctima" bajo derecho internacional refiere a la parte lesionada. Así, de conformidad con reglas generales de la responsabilidad internacional de los Estados a causa de violaciones iusfundamentales, la parte lesionada es aquella "cuyo derecho individual ha sido denegado o dañado por el acto ilegal internacional o que ha sido de otra manera particularmente afectado por dicho acto".

2. En concreto, dentro del área de la protección internacional de derechos fundamentales, la parte lesionada es el individuo cuyos derechos han sido violados; es decir, la parte cuyos derechos han sido conculcados generándosele un daño, de ahí que con frecuencia también se le refiere como la "parte agraviada". En el mismo sentido, el Reglamento de la CoIDH define el término "víctima" como equivalente a "la persona cuyos derechos han sido violados de acuerdo a la sentencia proferida por la Corte". Por lo cual, "víctima" es aquella persona cuyos derechos ya han sido determinados por el colegio jurisdiccional interamericano al establecer la actualización de violaciones en su detrimento.

3. Sin embargo, el elenco de personas amparadas bajo la noción de "victimas" ha descrito una expansión a la luz de la propia jurisprudencia interamericana. En efecto, por razón de su carácter como personas especialmente vinculadas con los titulares de los derechos menoscabados, la CoIDH ha extendido el reconocimiento de la condición de "víctima" a personas que en su jurisprudencia inicial no eran consideradas como tales. Este es el caso, por ejemplo, de los familiares de menores asesinados.[31] En este asunto contencioso conocido como "Niños de la Calle" contra el Estado guatemalteco, la CoIDH reconoció que los familiares de los menores torturados y asesinados también habían sufrido en sí mismas violaciones del artículo 5 de la Convención. Para decirlo con las propias palabras empleadas en aquella resolución interamericana:

> *La Corte debe destacar entre las conductas de los agentes estatales que intervinieron en los hechos del caso y que produjeron un impacto sobre sus familiares, la correspondiente al tratamiento que se dio a los cuerpos de los jóvenes cuyos cadáveres aparecieron en los Bosques de San Nicolás, […]. Estas personas no sólo fueron víctimas de la violencia extrema correspondiente a su eliminación física, sino que, además, sus cuerpos fueron abandonados en un paraje deshabitado, quedaron expuestos a las inclemencias del tiempo y a la acción de los animales y hubieran podido permanecer así durante varios días, si no hubieran sido encontrados fortuitamente. En el presente caso, es evidente que el tratamiento que se dio a los restos de las víctimas, que eran sagrados para sus deudos, y en particular, para sus madres, constituyó para éstas un trato cruel e inhumano.*[32]

4. Por lo dicho, no solo las personas directamente titulares de los derechos conculcados por la acción u omisión de las autoridades deben calificarse como víctimas directas de la violación, sino que dicha legitimación se decanta también hacia las personas que guardan con las primeras una relación especialmente cercana y de afecto, como puede ser el vínculo de parentesco en razón del cual ellas también resienten una afectación que debe ser

---

[31] Cfr. *Caso de los "Niños de la Calle" (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala*. Sentencia de 19 de noviembre 1999, párrafo 171.
[32] *Ibidem*, párrafo 174.

reparada por la resolución que eventualmente llegara a dictarse ya sea en la sede interna o en los canales internacionales de protección de los derechos.

5. En el orden interno el artículo 4º de la Ley General de Víctimas se refiere también a dos clases dentro de esta categoría. Según este numeral, son víctimas directas aquellas personas físicas que hayan sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional, o en general cualquiera puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". En cambio, los párrafos segundo y tercero del mismo numeral califican como víctimas indirectas a "los familiares o aquellas personas físicas a cargo de la víctima directa que tengan una relación inmediata con ella. Para este efecto se consideran víctimas indirectas, entre otros, al cónyuge, la concubina o el concubinario, a las hijas e hijos, a los padres o los dependientes económicos" de una víctima directa.

6. Con base en lo dicho, esta Comisión confiere el carácter de víctimas de las violaciones de derechos fundamentales calificadas en la especie a:

- **a) VD,** en calidad de víctima directa de las violaciones de derechos fundamentales acreditadas en la especie; y
- **b) T1**, en su calidad de victima indirecta, en razón de la relación de parentesco ascendiente de primer grado en línea recta (madre) que guarda con la victima directa de las violaciones.

X. REPARACIONES.

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 51 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, al acreditarse violaciones a los derechos humanos de M1, atribuible un servidor público adscrito a la Delegación de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Jalpa, Zacatecas, la Recomendación que se formule a este respecto debe incluir las medidas correspondientes para lograr la efectiva restitución de las personas afectada en sus derechos.

2. En un respeto irrestricto del Estado de Derecho, las personas gozarán de la garantía de que en caso de ser objeto de violación a sus derechos humanos, podrán reclamar que el o los responsables de dicha vulneración sean sancionados, pues el Estado tiene la posición de garante de sus derechos y por lo tanto; según lo ha dispuesto la Suprema Corte de Justicia de la Nación, "Las víctimas de violación a los derechos humanos o sus familiares, tienen derecho a la reparación adecuada del daño sufrido. Lo cual debe concretarse a través de medidas individuales tendientes a restituir, indemnizar y rehabilitar a la víctima, así como de medidas de satisfacción de alcance general y garantías de no repetición, mediante los procedimientos previstos legalmente para esos efectos, lo cual no es una concesión graciosa, sino el cumplimiento de una obligación jurídica. Lo anterior deriva tanto del régimen previsto constitucionalmente como de los instrumentos internacionales ratificados por México y de los criterios de organismos internacionales, los cuales se manifiestan claramente en el sentido de que es un derecho efectivo de las personas agraviadas a nivel fundamental obtener una reparación proporcional a la gravedad de las violaciones y al daño sufrido"[33].

3. El deber de reparación por violaciones a los derechos humanos, a nivel internacional lo encontramos dispuesto tanto en el sistema universal como regional de protección a los derechos humanos. En el ámbito universal, se encuentra previsto en los "*Principios y directrices básicos sobre el derecho a las víctimas de violaciones manifiestas a las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves al derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones"*, adoptada por la Asamblea

[33] Tesis P/LXII/2010, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena Época, t XXXIII, enero de 2011, pág. 28.

General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 2005, donde se dispone que las violaciones de derechos humanos deben contemplar, de forma apropiada y proporcional a la gravedad de ésta, una reparación plena y efectiva en las formas siguientes: indemnización, restitución, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, lo cual a su vez es también contemplado por la Ley General de Víctimas, en sus artículos 1, último párrafo, 7, fracción I y II, y particularmente en el texto legal del artículo 26, que establece que *"Las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera oportuna, plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva por el daño que han sufrido como consecuencia del delito o hecho victimizante que las ha afectado o de las violaciones de derechos humanos que han sufrido, comprendiendo medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y medidas de no repetición"*, además por lo previsto en el artículo 27 del mismo ordenamiento legal. Por ello, resulta particularmente importante la ejecución de las medidas de reparación por parte del Estado dirigidas a la no repetición en Zacatecas de hechos similares a los ocurridos en el presente caso.

4. En el sistema regional, la Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 63.1 establece que: Cuando se decida que hubo violación a un derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Asimismo, dispondrá, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o la situación que ha configurado la violación a estos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada.

5. Por su parte, La CoIDH, ha establecido que *"Las reparaciones, como el término lo indica, consisten en las medidas que tienden a hacer desaparecer los efectos de las violaciones cometidas. Su naturaleza y su monto dependen del daño ocasionado en los planos tanto material como inmaterial"*[34]. Este doble alcance de la norma reparatoria, ha incidido cada vez con mayor frecuencia en el desarrollo de la jurisprudencia de la CoIDH, dando lugar a una arquitectura reparatoria que tendrá como objetivo, no sólo borrar las huellas que en la víctima produjo el actuar del Estado, sino también evitar que ese tipo de hechos se vuelvan a repetir.[35]

6. Por lo que hace a este derecho, el artículo 51 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, dispone que, al acreditarse una violación a los derechos humanos atribuible a un servidor público estatal, la resolución formulada al respecto debe incluir las medidas que procedan para lograr la efectiva restitución de las personas afectadas en sus derechos.

Por lo tanto, en atención de las consideraciones vertidas a lo largo de este apartado, la Comisión estima pertinente fijar las siguientes bases para la reparación del daño acaecido como consecuencia de las violaciones de derechos acreditadas en el caso.

a) De las medidas de indemnización

1. La indemnización es una medida compensatoria que busca reparar los perjuicios económicamente evaluables que sean consecuencia de las violaciones a derechos humanos, ente los que se incluyen: el daño físico o mental; la pérdida de oportunidades, en particular las de empleo, educación y prestaciones sociales; los daños materiales y la pérdida de ingresos, incluido el lucro cesante; los perjuicios morales; los gastos de asistencia jurídica o de expertos, medicamentos y servicios médicos, psicológicos y sociales[36].

---

[34]Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Acevedo Jaramillo y otros Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de febrero de 2006. Serie C No. 144, Párr. 175.

[35] Rousset Siri, Andrés Javier (2011): *El Concepto de reparación integral en la Jurisprudencia Interamericana de Derechos humanos.* Revista Internacional de Derechos Humanos / ISSN 2250-5210 / 2011 Año I – N1 59 www.revistaidh.org.

[36]Numeral 20 de los Principios y Directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, Asamblea General de las Naciones Unidas, 16 de diciembre de 2005.

2. En razón a lo anterior, en términos de los artículos 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 26, 27, 40, 41, 42, 54, 58, 59 y demás aplicables de la Ley de Atención a Víctimas del Estado de Zacatecas, y toda vez que se acreditaron violaciones a los derechos humanos de **VD,** en su calidad de víctima directa de las violaciones de derechos fundamentales, así como de la señora **T1**, en su calidad de victima indirecta, la Comisión Ejecutiva de Atención Integral a Víctimas del Estado, deberá realizar su inscripción, en su calidad de víctima directa, en el Registro Estatal de Víctimas, a fin de que tenga acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral previsto en dicha Ley.

b) De las medidas de rehabilitación

1. Las medidas de rehabilitación buscan reducir los padecimientos físicos y psicológicos de las víctimas, a través del otorgamiento de servicios de atención médica, psicológica, jurídica y social que éstas requieran[37].

2. En este sentido, toda vez que se acreditaron violaciones a los derechos humanos en el presente instrumento recomendatorio, se deberá valorar y determinar si **VD,** en su calidad de víctima directa, y la señora **T1,** víctima indirecta, requieren de atención psicológica especializada, derivado de las posibles afectaciones presentadas a raíz de los hechos materia de la presente Recomendación. Y, de ser el caso, y así lo decidieran las víctimas, se realice el tratamiento psicológico necesario para su total restablecimiento.

c) De las medidas de satisfacción

1. Según los Principios Sobre el Derecho a Obtener Reparaciones ya invocados, las medidas de satisfacción deben incluir, cuando sea oportuno, la totalidad o parte de las medidas siguientes: medidas eficaces para conseguir que no se continúe con las violaciones; así como la aplicación de sanciones judiciales o administrativas a los responsables de las violaciones a los derechos fundamentales declaradas.

2. Por lo tanto, la Presidenta Municipal de Juchipila, **MTRA. MARÍA DEL ROCIO MORENO SÁNCHEZ**, deberá emprender, por medio de las instancias municipales competentes, las siguientes medidas de satisfacción:

- **a)** Iniciar un procedimiento de investigación para deslindar las responsabilidades administrativas o penales que pudieran corresponderles a **AR1, AR3** y **AR2** –en el caso de que sigan desempeñándose como servidores públicos en cualquier área de la administración municipal– ya que al momento de los hechos y en sus calidades de elementos de la Policía Municipal de Juchipila lesionaron el derecho a la integridad personal al someter a tratos crueles inhumanos o degradantes al detenido **VD.**
- **b)** Trabajar, de manera coordinada y permanente, en la capacitación jurídica del personal de la policía preventiva y de la justicia municipal de barandilla, a fin de que, desde una perspectiva fundada en los estándares del bloque de constitucionalidad y la jurisprudencia emanada del Poder Judicial de la Federación y la CoIDH, se erradiquen las violaciones a los derechos fundamentales de las personas detenidas en los separos preventivos de la Dirección de Seguridad Pública del municipio de Juchipila, Zacatecas;
- **c)** Garantizar la certificación médica de las personas que sean detenidas y privadas de la libertad en los separos preventivos de la Dirección de Seguridad Pública del municipio de Juchipila, Zacatecas;
- **d)** Remitir a esta Comisión las constancias que acrediten el cumplimiento de las medidas de satisfacción en los plazos señalados en el siguiente apartado.

d) De las garantías de no-repetición

[37]Ibid., Numeral 21.

1. Son aquellas que se adaptan con el fin de evitar que las víctimas vuelvan a ser objeto de violaciones a sus derechos y para contribuir a prevenir o evitar la repetición de actos de la misma naturaleza.

2. A fin de prevenir la violación de los derechos asentados en párrafos que anteceden, resulta indispensable que, la **MTRA. MARÍA DEL ROCIO MORENO SÁNCHEZ,** Presidenta Municipal de Juchipila, Zacatecas, implemente programas de dirigidos a los elementos de la Dirección de Seguridad Pública de ese municipio, en el respecto de los derechos humanos, específicamente de aquellos relacionados con el derecho a la legalidad y seguridad jurídica, en relación con la obligación de no realizar detenciones arbitrarias; del derecho a la integridad y seguridad personal, en relación con el derecho a la integridad física, el uso de la fuerza y la prohibición de infligir tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes; así como en los derechos de las personas privadas de su libertad y, en general, sobre el trato que deben recibir las personas que se encuentran bajo su resguardo.

De manera específica, se les deberá capacitar en las obligaciones contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Nacional sobre el uso de la fuerza, la Constitución Política del Estado de Zacatecas, la Ley Orgánica del Municipio, la Ley de Justicia Comunitaria del Estado de Zacatecas, el Bando de Policía y Buen Gobierno y demás aplicables, a fin de que realicen de manera eficaz las detenciones, cuidado y atención de las personas privadas de su libertad, salvaguardando ante todo el respeto, protección y garantía de los derechos humanos a la integridad personal y a la legalidad y seguridad jurídica que reviste a las detenciones.

3. De igual manera, deberán realizarse las gestiones necesarias para garantizar que la Dirección de Seguridad Pública del municipio, cuente con personal médico idóneo, adscrito a ésta de manera permanente, para que haga constar, de manera fehaciente, las certificaciones de todas aquellas personas que son privadas de su libertad, asegurando que éstas se lleven de acuerdo a los estándares establecidos en materia de derechos humanos. Y, así mismo, se cuente con instalaciones dignas, en condiciones de higiene óptimas para salvaguardar la dignidad de las personas que se encuentren privadas de su libertad en los separos preventivos del municipio de Juchipila, Zacatecas.

XI. RECOMENDACIONES.

Por lo anterior, y con fundamento en los 1 y 102 apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 2, 3, 4, 8, 17, 37, 51, 53, 54, 56, 57 y 58 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas se emiten las siguientes Recomendaciones:

PRIMERA. En un plazo máximo de un mes, a partir de la notificación de la presente Recomendación, se inscriban en el Registro Estatal de Víctimas a **VD**, en calidad de víctima directa de violaciones a derechos humanos, así como a **T1**, como víctima indirecta. Asimismo, dentro del plazo máximo de un año, contado a partir de la notificación de la presente Recomendación, se garantice su acceso oportuno al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, previsto en la Ley de Atención a Víctimas del Estado de Zacatecas.

SEGUNDA. En el plazo máximo de tres meses, contados a partir de la notificación de la presente Recomendación, se valore a **VD** y a la **C. T1**, y se determine, si las víctimas requieren de atención psicológica, y si es éste su deseo, se dé continuidad con dicho tratamiento hasta su total restablecimiento. Debiendo, remitir a este Organismo, las constancias que acrediten su debido cumplimiento.

TERCERA. En un plazo máximo de seis meses, contado a partir de la aceptación de la presente Recomendación, se implementen mecanismos que eviten que el Estado incumpla con su posición garante, respecto al derecho a la integridad y seguridad personal, en relación a su deber de garantizar que las personas privadas de su libertad, en los separos preventivos de la Dirección de Seguridad Pública de Juchipila, Zacatecas, no sean

sometidas a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Para lo cual, deberán implementarse los protocolos de actuación policial, a fin de garantizar que, los elementos de seguridad pública municipal, garanticen el respeto a la integridad y seguridad personal de las personas privadas de su libertad por éstos y así, prevenir que sean objeto de maltrato por su parte. En adición, deberán implementarse las acciones necesarias para asegurar que, todas las personas que sean detenidas, sean objeto de certificación médica, inmediatamente después de que se lleve a cabo la privación de su libertad. Finalmente, deberán realizarse las gestiones necesarias para que, las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública sean dignas, higiénicas y seguras para las personas que son internadas en ésta.

CUARTA. En un plazo máximo de un mes, contados a partir de la aceptación de la presente Recomendación, se inicien los procedimientos administrativos, a fin de determinar la responsabilidad en que incurrieron los elementos policiacos **AR1, AR3** y **AR2**, en el caso de que sigan desempeñándose como servidores públicos en cualquier área de la administración municipal, y se dé cumplimiento a las demás medidas de satisfacción ordenadas en el apartado 3 de la sección anterior.

QUINTA. Dentro de un plazo máximo de tres meses, contados a partir de la aceptación de la presente Recomendación, se realicen capacitaciones dirigidas al personal de la Dirección de Seguridad Pública del municipio de Juchipila, Zacatecas, así como al personal adscrito al Juzgado Comunitario, respecto a sus obligaciones contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Zacatecas, en la Ley Orgánica del Municipio, la Ley de Justicia Comunitaria del Estado de Zacatecas, el Bando de Policía y Buen Gobierno, en el Protocolo Nacional de Actuación Policial, y demás aplicables, a fin de que realicen de manera eficaz, la vigilancia, cuidado y atención de las personas privadas de su libertad en los separos preventivos, salvaguardando ante todo el respeto, protección y garantía de los derechos humanos a la integridad y seguridad personal, en particular a no ser objeto de penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

SEXTA Dentro de un plazo máximo de seis meses, contados a partir de la aceptación de la presente Recomendación, se realicen los trámites correspondientes, ante las instancias respetivas, a efecto de gestionar los recursos materiales y humanos mínimos indispensables, suficientes y eficaces para el debido funcionamiento de la Dirección de Seguridad Pública de Juchipila, Zacatecas, particularmente para que las instalaciones de los separos preventivos cuenten con la infraestructura necesaria para garantizar la seguridad de las personas que sean privados de su libertad en ellos, particularmente, para que éstas sean dotadas de circuito cerrado de videograbación y monitoreo, a fin de evitar agresiones como las ocurridas en los hechos materia de la presente recomendación.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 53, párrafo segundo de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, se hace del conocimiento de la autoridad a la que va dirigida esta Recomendación, que dispone de un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente en que ésta se le notifique, para que manifieste si la acepta o no, en el entendido de que, de no aceptarla, su respuesta se hará del conocimiento de la opinión pública. En caso de que la acepte, se le notifica que dispone de un plazo de 15 días, contados a partir del vencimiento del término del que disponía para responder sobre la aceptación, a fin de enviar las pruebas de su cumplimiento.

Por último, hágasele saber a los familiares de **VD**, el resultado de la presente recomendación y de conformidad con el artículo 61 de la Ley de este Organismo, que dispone de 30 días naturales, computados a partir de la fecha de notificación del presente documento, para que en caso de que exista inconformidad con la misma, interponga el recurso de impugnación correspondiente ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Así lo determina y firma

DRA. MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOS
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS
HUMANOS DEL ESTADO DE ZACATECAS

Expediente: CDHEZ/287/2020

Tipo de queja: Oficiosa.

Persona agraviada: VD†, persona detenida en separos de la Policía de Investigación, en el Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas.

Autoridad responsable:
I. Elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas.

Derecho humano vulnerado:
I. Derecho a la integridad personal y a la vida, en relación con el deber del Estado garante de las personas privadas de su libertad.

Autoridad presunta responsable:
Elementos de la Dirección de Seguridad Pública del municipio de Fresnillo, Zacatecas.

Derecho humano no vulnerado:
I**.** Derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica, en relación con el derecho a no ser objeto de detenciones arbitrarias.

Zacatecas, Zac., a 20 de diciembre de 2021; una vez concluida la investigación de los hechos que motivaron el expediente CDHEZ/287/2020, y analizado el proyecto presentado por la Visitaduría Regional de Fresnillo, la suscrita aprobó, de conformidad con los artículos 4, 8 fracción VIII, 17 fracción V, 37, 51 y 56 de la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, en relación con lo dispuesto por los numerales 161, fracciones X y XI, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 y 175 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, lo siguiente:

Recomendación 58/2021, que se dirige a la siguiente autoridad:

DOCTOR EN D. FRANCISCO JOSÉ MURILLO RUISECO, Fiscal General de Justicia del Estado de Zacatecas, por los hechos atribuidos a elementos de la Policía de Investigación, de la Fiscalía General de Justicia del Estado, por la vulneración al derecho a la integridad personal y a la vida, en relación con el deber del Estado garante de las personas privadas de su libertad.

Así como el **Acuerdo de No Responsabilidad**, que se dirige a la siguiente autoridad:

LIC. SAÚL MONREAL ÁVILA, Presidente Municipal de Fresnillo, Zacatecas, por los hechos atribuidos a elementos de la Dirección de Seguridad Pública de Fresnillo, Zacatecas, por la presunta violación al derecho a la legalidad y seguridad jurídica, en relación con el derecho a no ser objeto de detenciones arbitrarias.

R E S U L T A N D O S:

I. DE LA CONFIDENCIALIDAD.

1. De conformidad con los artículos 6º, apartado A, fracción II y 16, párrafo segundo, ambos de la Constitución Política de los Estados Mexicanos y los artículos 23 y 85 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, los datos personales, así como aquellos relativos a la vida privada y familiar, permanecerán confidenciales, ya que no tienen el carácter de públicos.

2. Asimismo, en términos de lo dispuesto por el artículo 4º, párrafo sexto, 6º, fracción II, y 16 de la Convención Sobre los Derechos del Niño, los nombres, apellidos y demás datos personales de niñas y niños vinculados con los hechos de la presente resolución, se mantienen bajo la misma estricta confidencialidad, en pleno respeto a su derecho a la intimidad y vida privada.

II. RELATORÍA DE LOS HECHOS Y OBJETO DE LA CONTROVERSIA.

1. En fecha 29 de junio de 2020, en el diario de circulación estatal Imagen, se publicó nota periodística bajo el título: *"Un hombre se ahorca en los separos de la Policía Investigadora de Fresnillo"*.

En esa misma fecha, el Departamento de Orientación y Quejas de este Organismo, en concordancia con lo dispuesto por el artículo 30, párrafo tercero, de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, así como en el numeral 63, fracción V, del Reglamento que rige su actuar, inició de manera oficiosa, queja por el deceso de **VD†** al interior de los separos de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado, con sede en Fresnillo, Zacatecas, acontecido el 26 de junio de 2020.

Por razón de turno, en esa misma fecha, se remitió el acuerdo de admisión de queja oficiosa, a la Visitaduría Regional de Fresnillo, de este Organismo, bajo el número de expediente citado al rubro, a efecto de formular el acuerdo de calificación de ésta, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 123 y 124 del Reglamento de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas.

La queja se calificó como presuntos hechos violatorios de derechos humanos.

2. Los hechos materia de la queja consistieron en lo siguiente:
En fecha 29 de junio de 2020, se publicó en el diario de circulación estatal Imagen, una nota periodística en la que esencialmente, se informó sobre el deceso de una persona del sexo masculino, en el interior de los separos de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado, con sede en el Municipio de Fresnillo; dicha persona, se encontraba detenida por presuntamente haber incurrido en la conducta que encuadra en los hechos que la ley señala como delito de violencia familiar.

3. Las autoridades involucradas, rindieron informe respectivo:

a) En fecha 10 de agosto de 2020, se recibió informe de autoridad que, por instrucciones del **SJAR**, rindió la **FMPT**, Fiscal del Ministerio Público Especializada en Derechos Humanos, Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

III. COMPETENCIA.

1. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas es competente, en términos de los artículos 1º, 4º, 6º, 8º fracción VII, inciso A) y 31 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, en relación con los numerales 15, 22 y 23 de su Reglamento Interno, debido a que la queja se promueve en contra de servidores públicos de Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, por hechos ocurridos en el año 2020.

2. De conformidad con el artículo 124, fracción I del Reglamento Interior de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, este Organismo advierte que, de los hechos materia de la queja, se puede presumir la violación de los derechos humanos de la parte agraviada, así como la responsabilidad por parte de los servidores públicos señalados.

3. Esta Comisión, presumió la violación de los siguientes derechos:

a) Derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica, en relación con el derecho a no ser objeto de detenciones arbitrarias.

b) Derecho a la integridad personal y a la vida, en relación con el deber del Estado garante de las personas privadas de su libertad.

IV. PROCEDIMIENTO ANTE LA COMISIÓN.

Con la finalidad de documentar las presuntas violaciones a derechos humanos, así como para determinar la existencia o no de responsabilidad por parte de las y los servidores públicos señalados, durante el procedimiento de investigación de esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, se entrevistó a las personas relacionadas con los hechos; se solicitaron informes de autoridad y en vía de colaboración; se analizaron informes, diversos documentos y las carpetas de investigación relacionadas con los hechos materia de esta Recomendación.

V. PRUEBAS.

Con base en lo estipulado en los artículos 48 y 49 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, en relación con los numerales 149, 150, 151, 152, 153, 154 y 155 del Reglamento Interior de este Organismo, durante el procedimiento realizado por esta Institución se recabaron los elementos probatorios documentales, remitidos tanto por la parte agraviada como por las autoridades señaladas como responsables, así como documentación, dictámenes e inspecciones necesarios para emitir la resolución correspondiente.

VI. SOBRE LOS DERECHOS NO VULNERADOS.

A. Derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica, en relación con el derecho a no ser objeto de detenciones arbitrarias.

1. Este Organismo, acorde a lo dispuesto por el artículo 49 de la Ley que rige su actuar, analizó el caudal probatorio contenido en el expediente **CDHEZ/287/2020** bajo un enfoque lógico jurídico de máxima protección a la víctima, con base en los estándares internacionales, interamericanos y nacionales de derechos humanos, en los precedentes emitidos en Recomendaciones en las cuales ha estudiado la violación del derecho a la vida, así como en los criterios aplicables tanto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo anterior, en virtud de que se acreditaron violaciones a los derechos humanos del **VD†**, atribuibles indirectamente a servidores públicos de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas.

2. Ahora bien, partiendo del hecho de que para ingresar a los separos de la citada Corporación, necesariamente precedió la detención al **VD†**, es necesario precisar que, por técnica jurídica, en la presente Recomendación se analiza en un primer momento el derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica, en relación con el derecho a no ser objeto de detenciones arbitrarias y, en segundo término, se realiza el análisis del derecho a la integridad personal y a la vida, en relación con el deber del Estado garante de las personas privadas de su libertad. Además, se aclara que, aunque la queja no se enderezó en contra de elementos de la Dirección de Seguridad Pública de Fresnillo, Zacatecas, toda vez que agentes de dicha Corporación fueron quienes practicaron la detención del agraviado, es que en el presente caso se parte de su actuación, para luego analizar la retención de **VD†** en los separos de la Policía de Investigación, ordenada por la **AMPF**, Agente del Ministerio Público, adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en razón de Género, de este Distrito Judicial.

3. Así pues, recordemos que la persona, posee ciertos atributos y virtudes que la distinguen de los demás seres y le dan un valor en sí misma, por tanto, es posible afirmar que los seres humanos son seres dignos; esto es, entes que merecen ser respetados y a los cuales el Estado debe garantizar una serie de derechos que le permitan tener una existencia plena y compatible con su propia naturaleza. A dichos derechos, para distinguirlos de otros, se les califica como "derechos humanos"; los cuales han sido clasificados de diversas maneras, según el momento histórico en el cual se ha realizado su estudio. Destacando así, la división

en derechos humanos de igualdad, derechos de libertad, y derechos de seguridad jurídica, entre otros.

4. De esta última clasificación, es fundamental señalar que el concepto de “seguridad” halla su raíz etimológica en la voz latina *securitas-atis*, cuyo significado es: “cualidad de seguro” o “certeza”, así como “cualidad del ordenamiento jurídico, que implica la certeza de sus normas y, por ende, la predictibilidad de su aplicación”[1]. Consecuentemente, esta última acepción es apta para definir la seguridad jurídica como el conocimiento y la certeza que tienen los gobernados de qué es lo que la ley establece como como permitido o prohibido, y cuáles son los procedimientos que se deben llevar a cabo en cada caso, según lo establecido en el marco legal de un país.

5. Luego entonces, la seguridad jurídica, involucra para el gobernado la certeza de que su vida, su persona, sus papeles, su familia, sus posesiones o sus derechos deberán ser respetados por todas las autoridades; y en caso de ser necesaria su afectación, ésta se sujetará a los procedimientos y modalidades previamente establecidos en la Constitución o leyes secundarias[2]. Por lo tanto, se puede afirmar que los derechos de seguridad jurídica, son quizás los que mayor relación guardan con el estado de derecho[3]; puesto que suponen un conjunto de derechos públicos subjetivos a favor de los gobernados. Derechos que pueden oponerse principalmente a los órganos del Estado a fin de exigirles que se sujeten a un conjunto de requisitos previos a la emisión de un acto que pudiera afectar la esfera jurídica de los gobernados y así, éstos no caigan en la indefensión o en la incertidumbre jurídica[4].

6. En el Sistema Universal de Protección de Derechos humanos, específicamente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el derecho a la libertad personal se encuentra reconocido en el artículo 3°; dicha norma, establece que todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad de su persona; mientras que el numeral 9, de dicho instrumento jurídico, prohíbe la detención arbitraria. Correlativamente, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en los numerales 9.1., 9.2. y 9.3., estipula que todas las personas tienen derecho a la libertad y a la seguridad personales, quedando prohibidas cualquiera forma de detenciones o prisión arbitrarias.

7. Por otro lado, la libertad, en términos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es *“la capacidad de hacer y no hacer todo lo que esté lícitamente permitido. En otras palabras, constituye el derecho de toda persona de organizar, con arreglo a la ley, su vida individual y social conforme a sus propias opciones y convicciones”*[5]*.* Luego entonces, la libertad, definida así, *“es un derecho humano básico, propio de los atributos de la persona, que se proyecta en toda la Convención”*[6]*.* En tanto que, la seguridad, es *“la ausencia de perturbaciones que restrinjan o limiten la libertad más allá de lo razonable”*; igualmente *“la seguridad también debe entenderse como la protección contra toda interferencia ilegal o arbitraria de la libertad física”*[7]*.*

8. En línea con el criterio anterior, en el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, el artículo 7.1. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, salvaguarda de manera general el derecho a la libertad y seguridad personales; en tanto que, los demás numerales tutelan las diversas garantías que deben cumplirse a la hora de privar a una persona de su libertad, cuando dicha detención sea atribuible a un agente del Estado. Entonces pues, **la detención de una persona es legítima, si está contemplada en la legislación interna de un Estado Parte de la Convención**, pero, **al mismo tiempo, se ajusta a lo dispuesto por la propia Convención**[8]. Adicionalmente, **deben considerarse** circunstancias tales como **si la detención ha sido ordenada por una autoridad judicial**, o

---

1 Real Academia de la lengua española, Diccionario de la Lengua Española, t II, 22ª, ed., Madrid, Espasa, Calpe, 2001, pág. 2040.

2 Las Garantías de Seguridad Jurídica, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2015, pág. 11.

3 CARBONELL S., Miguel, Los Derechos Fundamentales en México, CNDH, 2004, pág. 585.

4 Ídem, pág. 13.

5 Corte IDH, *Caso Valle Jaramillo y otros.* Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 192, párr. 108.

6 Ídem.

7 Corte IDH, *Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez vs. Ecuador*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de noviembre de 2007. Serie C No. 170, párr. *53.*

8 Corte IDH, *Gutiérrez Soler Vs. Colombia*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 12 de septiembre de 2005. Serie C No 132. párr. 52.

si se está en situaciones de flagrancia[9]. Ello, conforme a lo contemplado por el artículo 7.2, que de manera literal establece lo siguiente:

> *"Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados parte o por las leyes dictadas conforme a ellas".*

9. Bajo ese entendido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha establecido un criterio por medio del cual se ha pronunciado en el sentido de que, para analizar la privación de la libertad de una persona, deben tomarse en cuenta dos aspectos importantes, puesto que, en supuestos de detención calificados de legales, se debe respetar tanto el principio de tipicidad, como los procedimientos previamente establecidos. Lo anterior significa que nadie puede verse privado de la libertad personal sino por causas, casos o circunstancias expresamente tipificadas en la ley **(aspecto material**), pero, además, con estricta sujeción a los procedimientos objetivamente definidos por la misma **(aspecto formal)[10].**

10. Luego entonces, la detención o privación de la libertad de una persona será calificada como **ilegal, cuando no se realice con estricta sujeción a la normatividad interna, tanto en lo referente a los motivos y condiciones, como a los procedimientos establecidos**. Mientras que, la detención o privación de la libertad considerada como **arbitraria,** será aquélla que, **aún y cuando sea calificada de legal conforme a la normatividad estatal, se realice sin observar las disposiciones internacionales en materia de derechos humanos**. Es decir, aquélla que carezca de razonabilidad, proporcionalidad, garantías del debido proceso y garantías judiciales.

11. En el marco jurídico interno, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el artículo 14, párrafo segundo, que: *"Nadie podrá ser privado de la libertad (…) sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho"*[11]. Adicionalmente, el artículo 16 párrafo primero, constitucional establece que: "*Nadie puede ser molestado en su persona (…) sino en virtud de mandato escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento*"; pero además, en su párrafo quinto, el mismo precepto constitucional indica que: "*Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más cercana y ésta con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. Existirá un registro inmediato de la detención".*[12].

12. Como puede advertirse, el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, faculta la detención de cualquier persona, siempre y cuando se actualice cualquiera de los siguientes tres formalismos: mediante orden de aprehensión girada por el Juez competente, por orden de detención en caso urgente, girada por el Ministerio Público, o bien, en caso de delito flagrante; y, desde luego, el propio numeral impone a quien lleve a cabo tal detención, la obligación de poner inmediatamente a disposición de la autoridad competente a la persona detenida, y ésta, con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. Ello, en caso de que la conducta desplegada por el gobernado pueda constituir un hecho que la ley señala como delito, so pena de incurrir en arbitrariedad en la detención, si no se siguen tales formalidades.

13. En concordancia con lo anterior, el artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales acota los supuestos de flagrancia, bajo los cuales una persona puede ser detenida, siento éstos, cuando es sorprendida en el momento de estar cometiendo un delito, cuando inmediatamente después de cometerlo es detenida, en virtud de ser sorprendida cometiendo el delito y es perseguida material e ininterrumpidamente; o bien, cuando la persona sea señalada por la víctima u ofendido, algún testigo presencial de los hechos o quien hubiere intervenido con ella en la comisión del delito y cuando tenga en su poder instrumentos,

---

9 Ídem.

10 Corte IDH, *Caso Acosta Calderón*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de junio de 2005. Serie C No. 129, párr. 57.

11 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, art. 14.

12 Ídem, art. 16.

objetos, productos del delito o se cuente con información o indicios que hagan presumir fundadamente que intervino en el mismo.

14. Respecto de la flagrancia, es conveniente destacar que, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 1596/2014, precisó que, lo flagrante es "*aquello que brilla a todas luces"*; lo cual significa que es evidente e inconfundible, por lo que la concurrencia de una conducta delictiva flagrante es una condición que forzosamente debe configurarse con anterioridad a la detención. Eso conlleva a resolver entonces que, la autoridad, no tiene facultades para detener a una persona ante la sola sospecha de que pudiera estar cometiendo un delito (o de que estuviera por cometerlo); o simplemente porque presuma que esté involucrado en la comisión de un delito, incluso aunque eso sea objeto de investigación, si no cuenta con una orden de detención del órgano ministerial; así como tampoco se puede detener con la intención de investigar.

15. Ahora bien, es preciso señalar que, la seguridad pública, cuya función corre a cargo del Estado, la encontramos en diversas disposiciones de índole constitucional, como obligación y fin del mismo, así como un derecho a favor de los gobernados[13]; asimismo, las funciones de las corporaciones de seguridad pública, se encuentran previstas en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dicho numeral, establece que, **las competencias propias de los agentes de seguridad pública implican actos de investigación o de prevención del delito**, por lo que necesariamente, existe en la cotidianeidad, algún tipo de incidencia o contacto entre agentes del Estado y los gobernados, siendo este tópico, el que interesa analizar en el presente caso.

16. Motivo por el cual, conviene destacar que, en un marco integral de coordinación entre las corporaciones de seguridad pública, a partir del 03 de octubre de 2016, se inició con la primera fase de implementación del Sistema de Emergencias 911[14], estando Zacatecas entre los primeros Estados en los que se implementó dicho sistema. Lo cual, viene a colación, debido a que, en el presenta caso, la intervención de elementos de la Dirección de Seguridad Pública, de Fresnillo, Zacatecas, devino precisamente de un reporte ciudadano, realizado a dicho sistema, lo que facultaba y obligaba a dichos elementos a atender la situación, para brindar apoyo a la persona reportante, en el marco de su competencia.

17. En relación con lo anterior, el Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Fresnillo, también alude en su artículo 132 al supuesto de flagrancia, y establece de forma clara que**, toda persona que sea detenida por la comisión de delitos flagrantes, será consignada inmediatamente a la autoridad competente, sin demora**, sin que ello lo exima de que se le apliquen las sanciones que le correspondan, por las infracciones cometidas al propio Bando y las demás disposiciones municipales de observancia general.

18. Luego entonces, del análisis de las constancias que integran el sumario, específicamente de la carpeta de investigación [...], instaurada en contra del **VD†,** por los hechos que la ley señala como delito de violencia familiar, cometido en perjuicio de la **VI1**, se desprenden elementos probatorios suficientes para establecer que el agraviado fue detenido por agentes de la Dirección de Seguridad Pública de Fresnillo, Zacatecas, en fecha 26 de junio de 2020. Además, al concatenar dichas probanzas con el informe que en vía de colaboración rindió el **SPC2**, Coordinador del Subcentro C4 en este Municipio, es posible concluir que dicha detención fue legal, habida cuenta de que fue precedida por un reporte realizado por la **VI1**, quien solicitó el auxilio de las autoridades policíacas, en virtud de señalar haber sido agredida verbal y físicamente por su esposo, aquí agraviado.

19. Esto es, del referido informe signado por el **SPC2**, se desprende que, efectivamente, la **VI1** realizó un reporte al Sistema de Emergencias 911, a **09:29:20** horas del día **26 de junio de 2020**; en dicho reporte, la señora **VI1** mencionó que, estando en el interior de su domicilio, fue agredida física y verbalmente por su esposo, razón por la cual, autorizaba a las autoridades policiales para que entraran a su casa. No obstante, a las **09:45 horas** de ese mismo día, luego de que la reportante fuera entrevistada por el **C. EDSPMF1**, elemento de la

---

13 MARTÍNEZ N., Susana, *La seguridad pública en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*, Revista Ciencia Jurídica, Universidad de Guanajuato, División de Derecho, Política y Gobierno, Departamento de Derecho, año 7, número 13, 2018, pág. 91.

14 https://www.marthadebayle.com/v3/radiov3/sosv3/emergencia-como-funciona-el-911/

Dirección de Seguridad Pública de Fresnillo, Zacatecas, ésta manifestó que su pareja ya se había retirado del lugar, por lo que luego de su búsqueda y ubicación, fue detenido a las **09:52 horas**.

20. La información anterior, adquiere sustento con el oficio […], de fecha 26 de junio de 2020, signado por los **CC. EDSPMF1, EDSPMF2** y **EDSPMF3**, elementos de la Dirección de Seguridad Pública de Fresnillo, Zacatecas que atendieron el citado reporte, mediante el cual pusieron a disposición del Ministerio Público al **VD†**. En dicho documento, los elementos captores narraron cómo luego de recibir el multirreferido reporte de la señora **VI1**, se hicieron presentes en el domicilio de ésta, el cual coincide con los datos establecidos en el incidente que originó su reporte, para luego entrevistarla y obtener de ésta las características físicas y de las prendas de vestir que portaba el agraviado, por lo que una vez que se realizó su búsqueda y posterior localización, se procedió a su detención, previo señalamiento que, como su agresor, hiciere la señora **VI1**. De modo tal que, ante el señalamiento pleno de la víctima, se informó al agraviado el motivo de su detención, y se realizó lectura de sus derechos a las **09:51 horas**, para luego trasladarlo a la Dirección de Seguridad Pública de Fresnillo, Zacatecas para su respectiva certificación médica y elaboración de actas correspondientes.

21. En este punto, esta Comisión estima pertinente abrir un paréntesis y dejar debidamente establecido que, de acuerdo con el certificado médico practicado al **VD†** por el **DRDSPMF**, médico adscrito a la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Fresnillo, Zacatecas; así como con aquel que le fuera practicado por el **SPC3**, Director de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, ambos en fecha 26 de junio de 2020, el primero a las **12:00 horas** y el segundo a las **13:13 horas**, el agraviado se encontraba clínicamente sano y, por ende, no presentó lesiones en su superficie corporal qué clasificar. De modo tal que, en el presente caso, no se analiza la posible afectación del derecho a la integridad física y psicológica del agraviado, atribuible a sus elementos captores por acción o a los galenos, por omisión.

22. Bien, continuando con el estudio del derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica del **VD†** en relación con su derecho a no ser objeto de detenciones arbitrarias, con los medios de prueba anteriormente citados, aunados a las ratificaciones que hicieran los **CC. EDSPMF1, EDSPMF2** y **EDSPMF3**, elementos de la Dirección de Seguridad Pública de Fresnillo, Zacatecas, respecto de la detención del agraviado, en las cuales sostuvieron de manera general, lo que previamente habían establecido en su oficio de puesta a disposición; así como a las comparecencias que realizaran ante este Organismo, en las que ratificaron dichas constancias, en el sumario se cuenta también con la determinación que decretó de legal su detención, dictada a las **14:12** horas del día **26 de junio de 2020** por la **AMPF**, Fiscal del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en materia de Género, de este Distrito Judicial en pleno ejercicio de las facultades constitucionales y legales conferidas; desprendiéndose de dicho medio de prueba que, el agraviado, le fue puesto a disposición a las **12:20 horas** de ese mismo día.

23. En ese orden de ideas, esta Comisión halla debidamente probado que la detención del **VD†**, practicada por los **CC. EDSPMF1, EDSPMF2** y **EDSPMF3**, elementos de la Dirección de Seguridad Pública de Fresnillo, Zacatecas, se encuentra debidamente justificada, pues como ya se advirtió, previo a su intervención e interacción con éste, existió un reporte ciudadano realizado por la señora **VI1**, lo que los facultaba a acudir a su domicilio; luego de lo cual, realizaron la búsqueda y localización de éste, procediendo a su detención ante el señalamiento directo de la víctima, siendo importante mencionar que, de la denuncia presentada por la señora **VI1**, en fecha 26 de junio de 2020 se desprende que, efectivamente, ella realizó el multicitado reporte al Sistema de Emergencias 911 y luego, reconoció y señaló al agraviado como su agresor. De tal suerte que, dicha detención, se apega a las disposiciones contenidas en la Constitución General de la República, así como en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que regulan los supuestos de flagrancia; por lo que, en ese sentido, se resuelve que la privación de su libertad, a manos de elementos de la Policía Municipal de Fresnillo, Zacatecas, no puede calificarse de ilegal, al efectuarse en su aspecto material, conforme a las causas, casos o circunstancias expresamente tipificadas en la ley.

24. Luego, es menester analizar si la detención del agraviado, se llevó a cabo con estricta sujeción a los procedimientos definidos en el marco jurídico nacional, es decir, si se cumplió con su aspecto formal. Para ello, es preciso remitirnos al término de “inmediatez”, previsto por el ya citado precepto 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su acápite quinto faculta la detención por cualquier persona, de otra que esté cometiendo un delito, a la vez que impone la obligación de poner a disposición de la autoridad competente a dicha persona de manera inmediata, máxime si como en el caso ocurrió, la detención es efectuada por agentes del Estado.

25. En ese sentido, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los amparos en revisión 2470/2011 y 997/2012 estableció que se está ante una dilación indebida en la puesta a disposición *“…cuando, no existiendo motivos razonables que imposibiliten la puesta a disposición inmediata, la persona continúe a disposición de sus aprehensores y no sea entregada a la autoridad que sea competente para definir su situación jurídica. Tales motivos razonables únicamente pueden tener como origen impedimentos fácticos, reales, comprobables y, particularmente lícitos. Esto es, que estos motivos deben ser compatibles con las facultades estrictamente concedidas a las autoridades”.* Motivo por el cual, es necesario determinar, caso por caso, si se ha producido una vulneración del derecho reconocido a la persona detenida, de ser puesto a disposición de la autoridad competente, de forma inmediata.[15]

26. Lo anterior, significa que los agentes de Policía no pueden, ni deben retener a una persona por más tiempo del estrictamente inevitable para trasladarla ante el Ministerio Público, con el objeto de ponerlo a disposición, siendo ante dicha autoridad donde deberán efectuarse las diligencias de investigación oportunas y contiguas, que permitan establecer su situación jurídica (de la cual depende su restricción temporal de la libertad personal).

27. Entonces pues, es posible afirmar que, en el presente caso, la detención del señor **VD†**, practicada por los **CC. EDSPMF1, EDSPMF2** y **EDSPMF3**, elementos de la Dirección de Seguridad Pública de Fresnillo, Zacatecas, se encuentra apegada a la legalidad en cuanto a su aspecto formal, en la inteligencia de que este Organismo no advierte una dilación en su puesta a disposición ante el Ministerio Público.

28. Lo cual, es posible corroborar con el análisis lógico del incidente originado con el reporte que hiciere su esposa al Sistema de Emergencias 911, del cual se desprende que su detención por los agentes captores, aconteció a las **09:51 horas** del día 26 de junio de 2020, mientras que, de acuerdo con la determinación que decretó de legal su detención, dictada a las **14:12** horas del día **26 de junio de 2020**, por la **AMPF**, Fiscal del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en materia de Género, de este Distrito Judicial, fue puesto a su disposición a las **12:20 horas** de ese mismo día. Tiempo que este Organismo considera el estrictamente necesario para su certificación médica, elaboración del oficio de puesta a disposición, así como de las correspondientes actas que obran en la carpeta de investigación [...], por parte de los elementos captores. Por consiguiente, esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, resuelve que la detención del señor **VD†**, practicada por los **CC. EDSPMF1, EDSPMF2** y **EDSPMF3**, elementos de la Dirección de Seguridad Pública de Fresnillo, Zacatecas, se vio apegada a la legalidad tanto en su aspecto material como formal y, en consecuencia, no existe reproche alguno que realizar a dichos agentes.

29. Ahora bien, en el caso concreto, es necesario también analizar una posible arbitrariedad en la detención del **VD†**, derivada de la actuación de la **AMPF**, Fiscal del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en materia de Género, de este Distrito Judicial, una vez que éste quedó a su disposición. Para ello, es necesidad remitirnos al contenido del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice:

> *“…Ningún indiciado podrá ser retenido por el Ministerio Público por **más de cuarenta y ocho horas**, plazo en que deberá ordenarse su libertad o ponérsele a*

15 La Corte IDH y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se han pronunciado en el mismo sentido. Véase, de la Corte IDH: *Caso Acosta Calderón vs Ecuador* y *Caso Palamara Iribarne vs Chile*. Del Tribunal Europeo, véase: *Borgan and Others vs United Kongdom* y *P.B. vs Francia.*

> *disposición de la autoridad judicial; este plazo podrá duplicarse en aquellos casos que la ley prevea como delincuencia organizada. Todo abuso a lo anteriormente dispuesto será sancionado por la ley penal…" (Sic).*

30. En relación con la disposición anterior, el Código Nacional de Procedimientos Penales, mediante el artículo 131, fracción XI, faculta a la Representación Social, para ordenar la detención y retención de los imputados, cuando así resulte procedente. Por lo tanto, atendiendo a sus facultades y a los hechos del caso, es que la referida Fiscal resolvió, fundando y motivado debidamente, la retención del agraviado **hasta por 48 horas**, tal y como se desprende de su determinación de fecha 26 de junio de 2020, a las **13:20 horas**; lo cual, a juicio de este Organismo, no se advierte irregular y no implica arbitrariedad en la detención del **VD†** y, por ende, no vulneró en su perjuicio su derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica, en relación con su derecho a no ser objeto de detenciones arbitrarias, De tal suerte que, no resulta procedente la realización de reproche alguno a la **AMPF**, por el posible menoscabo a la esfera de derechos fundamentales del agraviado.

VIII. SOBRE LOS DERECHOS VULNERADOS

a. Derecho a la integridad personal y a la vida, en relación con el deber del Estado garante de las personas privadas de su libertad.

I. De la posición del Estado, como garante de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.

1. Esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, ha hecho hincapié en el deber del del Estado, como garante de los derechos humanos de las personas; fundamentalmente, de los grupos en situación de vulnerabilidad, como es el caso de las personas privadas de su libertad. Motivo por el cual, es preciso apuntar que, dicho deber, tiene como base principal el reconocimiento de la dignidad inherente al ser humano, por lo que el pleno respeto a los derechos humanos de todas las personas, debe regirse bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, conforme lo dispuesto por el artículo 1°, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2. Bajo esa lógica, es posible afirmar que, el irrestricto respeto a la dignidad humana constituye un límite a la actividad estatal, válido para todo órgano o funcionario que se encuentre en una situación de poder frente a las personas. Así, en caso de que el Estado prive de manera legal a una persona de su libertad, asume una responsabilidad especial, relacionada con el respeto y la garantía de sus derechos humanos; ya que, tanto la seguridad, como la integridad de éstas, quedan bajo su custodia.

3. Lo anterior, habida cuenta de que, el Estado, tiene una posición especial de garante respecto de las condiciones de reclusión de dichas personas y, por consiguiente, tiene la obligación de vigilar porque tales condiciones, sean compatibles con su dignidad humana. En ese sentido, es posible afirmar que, tal obligación, no se materializa con la mera provisión de servicios básicos, sino que debe hacerse patente mediante el establecimiento de recursos y la implementación de medidas que aseguren la tutela efectiva de los derechos humanos de las y los internos.

4. Relativo a lo anterior, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha sintetizado la importancia de dicha obligación, bajo la siguiente premisa:

> *"La proclamación de derechos sin la provisión de garantías para hacerlos valer queda en el vacío. Se convierte en una formulación estéril, que siembra expectativas y produce frustraciones. Por ello es preciso establecer las garantías que permitan reclamar el reconocimiento de los derechos, recuperarlos cuando han sido desconocidos, restablecerlos si fueron vulnerados y ponerlos en práctica cuando su ejercicio tropieza con obstáculos indebidos". [16]*

16 CIDH, *El acceso a la justicia como garantía de los derechos económicos, sociales y culturales. Estudio de los estándares fijados por el sistema interamericano de derechos humanos*, OE A/Ser.L/V/II .129 Doc. 4, cidh/oea, 7 de septiembre de 2007, párr. 183, disponible en: http://cidh.org/pdf%20files/acceso%20a%20la%justicia%desc.pdf

5. Con base en ello, el propio Tribunal Interamericano, ha reiterado en diversas ocasiones que, la mayoría de las muertes de personas privadas de su libertad, que suceden al interior de los centros penitenciarios o establecimientos de detención de la región, guardan estrecha relación con las condiciones de violencia interna, resultante de la falta de prevención y atención oportuna de las autoridades penitenciarias. En tanto que, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias, ha señalado que, las autoridades mexicanas, no han abordado de manera adecuada el problema de autogobierno en los centros de reclusión, e incluso, se mantienen al margen del asunto, ya sea por temor o por complicidad[17].

6. Así las cosas, recordando el derecho a la vida es aquel *"respecto del cual no se autoriza suspensión alguna, ni siquiera en situaciones excepcionales"*[18]; mientras que, el derecho a la integridad personal *"es aquél que tiene todo sujeto para no sufrir tratos que afecten su estructura corporal, sea física, fisiológica o psicológica, o cualquier otra alteración en el organismo que deje huella temporal o permanente, que cause dolor o sufrimiento grave con motivo de la injerencia o actividad dolosa o culposa de un tercero"*[19], puede concluirse que, desde la perspectiva de los derechos humanos, las personas internas deben recibir el mismo respeto a su dignidad humana que aquél que deben recibir las personas en libertad.

7. Por consiguiente, este Organismo Autónomo, tal como lo ha sustentado en diversos documentos recomendatorios, y en concordancia con la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sostiene que, **la reclusión no tiene que imponer mayores restricciones al disfrute de los derechos humanos que las que devienen de la propia privación de la libertad.** Motivo por el cual, la vida, e integridad moral, física, sexual y psicológica de todas las personas internas, deberá ser salvaguardada por la autoridad penitenciaria de forma reforzada, garantizando, manteniendo y, en su caso, restableciendo el orden y la paz dentro de los establecimientos carcelarios, utilizando para ello los protocolos aplicables, y con apoyo de las herramientas, los mecanismos y el equipo necesarios disponibles para el cumplimiento de sus atribuciones.

8. Bajo ese contexto, atendiendo a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el entendido de que para establecer que se ha producido una violación al derecho a la vida, no se requiere determinar la culpabilidad de sus autores o su intencionalidad, y tampoco es preciso identificar individualmente a los agentes a quienes se atribuyen los hechos violatorios, ya que resulta suficiente demostrar que se han verificado acciones u omisiones, que hayan permitido la perpetración de esas violaciones, o que exista una obligación del Estado que haya sido incumplida; resultó factible que esta Comisión conociera de los hechos en que perdiera la vida **VD†,** pues los hechos acontecieron mientras se encontraba detenido en los separos de la Policía de Investigación, de la Fiscalía General de Justicia del Estado, en Fresnillo, Zacatecas, bajo la custodia del Estado.

9. Lo anterior, significa que, nuestra intervención es posible en virtud a la atribución de investigar las posibles violaciones a derechos humanos, atribuidas a autoridades estatales y municipales, ya sea que tales violaciones sean por acción o por omisión. Motivo por el cual, en el caso motivo de análisis, se procede primeramente a establecer la obligación del Estado, como garante de los derechos de las personas privadas de su libertad, para, enseguida, realizar el estudio detallado del derecho a la vida y del derecho a la integridad personal, conculcados en perjuicio del ahora occiso. En otros términos, toda vez que la muerte de **VD†**, puede representar por omisión, una vulneración a su derecho a la vida y a su integridad personal, su deceso se estima atribuible, indirectamente, al personal adscrito a la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, en virtud de que, en su calidad de servidores públicos representantes del Estado, su obligación consiste en garantizar los derechos humanos de todas las personas internas bajo su custodia, incluido desde luego, el derecho a la vida, con base en los argumentos hasta aquí expuestos.

---

17 Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, *Propuesta General 1/2018, La ejecución penal desde los derechos humanos,* pág. 42.

18 Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Observación General núm. 6. Derecho a la vida, HRI/GEN/1/ Rev.9, aprobada en el 16º periodo de sesiones, 30 de abril de 1982, párr. 1.

19 Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Recomendación 69/2016, de fecha 28 de diciembre de 2016.

10. En ese entendido, debemos partir de qué significa el término “garante”. Para ello, es dable decir que, la raíz etimológica de dicho término proviene del vocablo francés *“garant”* que, a su vez, viene de la palabra germánica *“Warren”*, que significa: *“hacerse responsable, asegurar”*. En términos legales, la figura del garante se configura por aquel que se compromete a responder por otra persona[20]. Persona con la obligación jurídica de garantizar un derecho a un titular[21]. Entonces pues, frente a las personas privadas de libertad, el Estado se encuentra en una posición especial, reforzada, de garante, toda vez que las autoridades […] ejercen un fuerte control o dominio, frente a las personas que se encuentran bajo su custodia[22].

11. En consecuencia, una vez que el deceso de una persona privada de la libertad ha ocurrido, el Estado debe actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar los actos que se sospeche que fueron cometidos por personas o entidades privadas.[23] Pues en caso contrario, podría incurrir en responsabilidad; lo cual, es imperativo en los casos de suicidios y homicidios ocurridos dentro de las cárceles y centros penitenciarios bajo su jurisdicción. Motivo por el cual, se reitera, la obligación de este Organismo, en la especie, consiste en investigar la responsabilidad de las autoridades involucradas, en la vulneración del derecho a la vida e integridad personal de **VD†**, persona que en fecha 26 de junio de 2020, ingresó a los separos de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, con sede en el municipio de Fresnillo, lugar donde horas después, perdiera la vida.

12. Luego entonces, es pertinente mencionar que, la muerte de personas privadas de libertad en los centros de reclusión o espacios de detención temporal, en muchas ocasiones se producen como resultado de la falta de prevención y de adopción de medidas adecuadas para mitigar la amenaza.[24] Motivo por el cual, en el caso concreto y de acuerdo con las obligaciones descritas en párrafos antecedentes, este Organismo nota que, los servidores públicos por razones de su cargo de custodia, vigilancia, protección y seguridad de las personas, debieron cumplir con la encomienda derivada de la ley para evitar que **VD†** perdiera la vida; lo cual, evidentemente no previeron siendo una situación que sí es predecible, con lo cual se violentó el deber de cuidado que objetivamente era necesario que observaran.

13. Al respecto, recordemos que, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el Amparo en revisión 2029/2011, enfatizó que, los derechos “insuspendibles”, son aquéllos que, sin importar que se esté compurgando una pena privativa de libertad, deben seguir gozándose de forma irrestricta. Como ejemplo de ello, citó precisamente el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal y trato digno, prohibición de tortura, entre otros. Asimismo, puntualizó que, en estos casos, la posición del Estado como garante absoluto de los mismos le implican obligaciones de tutela, ya que la compurgación de una pena privativa de libertad no puede justificar en momento alguno la pérdida de algún derecho de esta naturaleza[25].

14. En el caso de esta Recomendación, esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas encontró que, personal de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de justicia del Estado, con sede en el Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas, incurrió en omisiones que vulneraron los derechos humanos del señor **VD†**, cuando éste perdió la vida al interior de los separos de dicha corporación, donde se encontraba detenido a disposición de la Representación Social, derivado de su detención en flagrancia, por la posible comisión del delito de violencia familiar en agravio de la **VI1**, dentro de la carpeta de investigación [...].

---

20 Obtenido de: http://conceptodefinicion./d/

21 Obtenido de: http://popjuris.com/dicionario/definicion-de/garante/

22 Corte IDH, Caso *Instituto de Reeducación del Menor* Vs. Paraguay. Sentencia de 2 de septiembre de 2004 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), párr.152.

23 Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Observación General núm. 31. Naturaleza de la obligación jurídica general impuesta a los Estados Partes en el Pacto, CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, aprobada en el 80º periodo de sesiones, 29 de marzo de 2004, párr. 8.

24 CIDH. Informe sobre los derechos humanos de las personas privadas de libertad en las Américas. OEA, aprobado por la CIDH el 31 de diciembre de 2011, párr. 285. Consultado en: https://www.oas.org/es/cidh/ppl/docs/pdf/ppl2011esp.pdf, en fecha 14 de abril de 2020.

25 Cfr. P. LXIV/2010, de rubro “DERECHOS A LA INTEGRIDAD PERSONAL Y AL TRATO DIGNO DE LOS DETENIDOS. ESTÁN TUTELADOS CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONALMENTE Y SON EXIGIBLES INDEPENDIENTEMENTE DE LAS CAUSAS QUE HAYAN MOTIVADO LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD.”, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, enero de 2011, p. 26.

Asimismo, de la revisión de los separos de dicha corporación, realizada por personal adscrito a esta Comisión, en fecha 30 de junio de 2020, se pudo constatar, con la información recopilada que, luego de que éste ingresó a dichas instalaciones, fue debidamente certificado por el médico legista de turno quien, como ya se apuntó, no documentó lesiones en su humanidad.

15. En lo atinente, las Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos[26], establece que todos los establecimientos penitenciarios o lugares donde se lleve a cabo la detención de personas, deberán disponer de los servicios de un médico calificado que cuente con algunos conocimientos psiquiátricos, y se actúe a efecto de proporcionar al detenido un servicio psiquiátrico para su diagnóstico y, si fuere necesario, para el tratamiento de los casos de enfermedades mentales, además de disponer del traslado de los enfermos cuyo estado requiera cuidados especiales, a establecimientos de retención especializados o a hospitales civiles. De la misma manera, dicho instrumento jurídico estatuye que, el médico, deberá examinar a cada recluso tan pronto sea posible después de su ingreso y, posteriormente, tan a menudo como sea necesario, en particular para determinar la existencia de una enfermedad física o mental, y tomar en su caso, las medidas necesarias.

16. Por su parte, las Reglas Mínimas de la Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela), menciona en su artículo 24 que, "[l]a prestación de servicios médicos a los reclusos es una responsabilidad del Estado; además de que los reclusos gozarán de los mismos estándares de atención sanitaria que estén disponibles en la comunidad exterior y tendrán acceso gratuito a los servicios de salud necesarios sin discriminación por razón de su situación jurídica", y que "[l]os servicios médicos se organizarán en estrecha vinculación con la administración del servicio de salud pública general y de un modo tal que se logre la continuidad exterior del tratamiento y la atención, incluso en lo que respecta al VIH, la tuberculosis y otras enfermedades infecciosas, y la drogodependencia"[27].

17. Se observa entonces que, en el caso de personas privadas de su libertad, bajo la custodia del Estado, sea en centros de detención temporal o establecimientos penitenciarios, la salvaguarda de sus derechos fundamentales, debe ejercerse por el Estado bajo un estándar de deber reforzado; implementando todas les medidas que sean necesarias para evitar que, por acción o por omisión, sus agentes, incurran en acciones u omisiones que atenten contra el derecho a la vida e integridad.

II. Del derecho a la vida.

18. Este Organismo Constitucional Autónomo, ha reiterado que, el derecho a la vida ocupa un lugar especial en la lista de los derechos fundamentales de la persona[28]. Tanto así que, pese a que la Doctrina afirma que todos los derechos humanos tienen igual valor[29], a la hora de examinar casos concretos de violaciones de este derecho, los Organismos Internacionales y Regionales competentes, no ponen en tela de juicio, la necesidad de destacar el carácter especial del derecho a la vida. Bajo esa perspectiva, el derecho a la vida se estima como prerrequisito para el disfrute de todos los demás derechos humanos.[30] Dicho, en otros términos, es un derecho fundamental, esencial, sin el cual resulta imposible el disfrute de otros derechos o libertades, pues éstos, carecerían de sentido ante la desaparición de la persona titular del derecho; por ello, el derecho a la vida, como inseparable de toda persona, involucra que nadie puede ser privado de la vida de forma

---

26 Adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en 1955, y aprobadas por el Consejo Económico y Social en sus resoluciones 663C (XXIV) de 31 de julio de 1957 y 2076 (LXII) de 13 de mayo de 1977, apartado 22 al 26.

27 Reglas Mínimas de la Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela). Asamblea General, resolución 70/175, anexo, aprobado el 17 de diciembre de 2015.

28 Ver, por ejemplo, las Recomendaciones 01/2020, 21/2021 y/o 28/2021.

29 Ver, por ejemplo, el siguiente pasaje de la Declaración de Viena, adoptado por la segunda Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos, celebrada en Viena en 1993: *"Todos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes y están relacionados entre sí. La comunidad debe tratar los derechos humanos en forma global de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y dándoles a todos la misma importancia."* (párr. 5).

30 Corte IDH, *Caso Espinoza González* vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2014. Serie C. No. 289, párr. 205.

arbitraria. Dicho derecho, se encuentra reconocido en diversos instrumentos internacionales y regionales, firmados y ratificados por el Estado Mexicano[31].

19. De este modo, mediante su Observación General sobre el artículo 6, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Comité de Derechos Humanos, calificó al derecho a la vida como: *"el derecho supremo respecto del cual no se autoriza suspensión alguna, ni siquiera en situaciones que pongan en peligro la vida de la nación".*[32] Aunado a ello, en un caso relativo a la pena de muerte, analizado en 1993, el propio Comité, sostuvo lo siguiente:

> *"El punto de partida de un examen de esta cuestión debe ser la obligación el Estado parte (…) de garantizar los derechos reconocidos en el Pacto a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción. El derecho a la vida es el más esencial de estos derechos"*.[33]

20. A partir de entonces, el Comité ha reiterado en sus resoluciones, de manera textual, que: *"El derecho a la vida es el más esencial de estos derechos"*[34]. Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, utilizando un lenguaje más sutil y cuidadoso en los casos en que ha abordado dicho tópico, sostuvo, en la Opinión Consultiva 16/99, que: "*Si el debido proceso legal, con su conjunto de derechos y garantías, debe ser respetado en cualesquiera circunstancias, su observancia es aún más importante cuando se halle en juego el supremo bien que reconocen y protegen todas las declaraciones y tratados de derechos humanos: la vida humana".*[35]

21. Mientras tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, también ha reconocido de manera enfática el carácter especial del derecho a la vida. En una decisión, adoptada en 1996, sostuvo lo siguiente:

> *"(…) la Comisión Interamericana de Derechos Humanos debe destacar (…) que el derecho a la vida entendido como un derecho fundamental de la persona humana consagrado en la Declaración Americana y en diversos instrumentos internacionales a escala regional y universal, tiene el estatus de jus-cogens."*[36]

22. Asimismo, la Comisión explicó que, el concepto de *juscogens*, "*se deriva de un orden superior de normas establecidas en tiempos antiguos y que no pueden ser contravenidas por las leyes del hombre o de las naciones."* [37] En adición a lo anterior, este Organismo destaca el hecho de que, en una decisión más reciente, la Comisión Interamericana precisó que: "*El derecho a la vida es ampliamente reconocido como el derecho supremo del ser humano y conditio sine qua non para el goce de todos los demás derechos."*[38] Así, se tiene que, el derecho a la vida se encuentra reconocido, en el ámbito universal, por el artículo 3°, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y por el numeral 6.1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Instrumentos que establecen de forma genérica que toda persona tiene derecho a la vida, sin condicionar este derecho a si la persona se encuentra o no privada de su libertad. Aunado a ello, el Comité de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, resolvió, a través de la Observación General número 6, que el derecho a la vida es un derecho supremo respecto del cual, no se autoriza suspensión alguna. Dado su carácter inviolable, el derecho a la vida forma parte del *iuscogens*[39] y conforma un núcleo inderogable, al encontrarse consagrado como uno de los derechos que no admiten suspensión en casos de guerra, peligro público u otras amenazas a la independencia o seguridad de los Estados[40].

---

31 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, art. 133. "Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de las entidades federativas.

32 Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Observación General No. 6, párr. 1 (1982).

33 Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, *Caso Kindler* vs. Canadá, párr. 13.1 (énfasis agregado).

34 Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, *Caso A.R.J.* vs. Australia, párr. 6.8 (1997); G.T. c. Australia, párr. 8.1 (1998).

35 Corte IDH, Opinión Consultiva OC-16/99, párr. 135.

36 Oficina en México, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Escuela de Graduados en Administración Pública y Política Pública, México, D.F., septiembre de 2007, pág. 100.

37 Corte IDH, *Caso Remolcadora* 13 de marzo, párr. 79 (1996). Ver también Sequieras Mangas c. Nicaragua, párr. 145. (1997). La CIDH hace una exégesis de la relación y las diferencias entre los conceptos de derecho consuetudinario y de *jus cogens* en los párrafos 43 a 50 de su decisión en el C*aso Domínguez* vs. Estados Unidos (2002).

38 Corte IDH, *Caso Edwards* y otros vs. Bahamas, párr. 109 (2001).

39 Corte IDH. Informe No. 47/96, Caso 11.436: Caso *Víctimas del Barco Remolcador "13 de marzo"* vs Cuba, 16 de octubre de 1996, párr.79.

40 Corte IDH. *Caso Galdeón García* vs Perú. Sentencia de 6 de abril de 2006. Serie C. No.147, párr. 32.

23. Por otro lado, en contexto regional, el derecho a la vida se encuentra previsto en el artículo 1°, de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, así como en el artículo 4°, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en términos similares a los señalados en el párrafo anterior. Adicionalmente, los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, establecen que, el respeto al derecho a la protección de la vida, no puede ser objeto de suspensión alguna. Correlativamente, en el marco jurídico interno, el derecho a la vida se encuentra consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyas normas se encaminan a reconocer la conservación y la protección de la vida humana. Lo cual, ha sido sustentado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tras el análisis integral y extensivo de lo estipulado por los artículos 1°, 14 y 22 constitucionales, de los cuales, sostuvo nuestro Máximo Tribunal, se desprende la protección de este derecho[41].

24. En ese tenor, es posible concluir que, las obligaciones del Estado, respecto de la garantía del respeto a la vida, se clasifican de la siguiente manera:

> a) Negativas: implican una abstención, un "no hacer" o una no intervención y,
> b) Positivas: requieren de un "hacer" por parte del Estado; esto es, de la adopción e implementación de medidas, a través de sus diversas instituciones y agentes, para su debido cumplimiento; es decir, para proteger y preservar la vida, garantizando el pleno y libre ejercicio de los derechos de todas las personas bajo su jurisdicción.[42]

25. De esta manera, en lo concerniente al derecho a la vida, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al pronunciarse sobre su garantía, ha sostenido que:

> *"…no solo presupone que ninguna persona sea privada de su vida arbitrariamente (obligación negativa), sino que además requiere, a la luz de su obligación de garantizar el pleno y libre ejercicio de los derechos humanos, que los Estados adopten todas las medidas apropiadas para proteger y preservar el derecho a la vida (obligación positiva), de quienes se encuentren bajo su jurisdicción. Esta protección activa del derecho a la vida por parte del Estado no solo involucra a sus legisladores, sino a toda institución estatal y a quienes deben resguardar la seguridad, sean éstas, fuerzas de policía o sus fuerzas armadas"[43].*

26. En ese entendido, este Organismo considera que, cuando existe una omisión de salvaguardar la vida de personas detenidas bajo la custodia del Estado, por falta de vigilancia de las autoridades penitenciarias, se actualiza el incumplimiento de su deber reforzado de cuidado, en su calidad de garante. Es decir, en lo que concierne al derecho a la vida de las personas privadas de su libertad, el Estado se encuentra en una posición especial de garante, motivo por el cual, su obligación de salvaguardar este derecho es aún mayor, por lo que debe asegurarse de proporcionar condiciones mínimas que sean compatibles con el respeto a la dignidad humana. Consecuentemente, el Estado tiene el deber de prevenir todas aquellas situaciones que pudieran conducir, por acción o por omisión, a la supresión de dicho derecho. [44]

27. En cuanto al deber del Estado, como garante de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad, este Organismo considera oportuno puntualizar que, la jurisprudencia universal e interamericana, también reconoce la **responsabilidad del Estado por omisión** debido a la desprotección de los presos y la inatención a sus necesidades básicas. Una de las primeras decisiones al respecto, ampliamente citada en la jurisprudencia posterior, es la emitida por el Comité de Derechos Humanos en el *Caso Dermit vs. Uruguay*. En ese caso, luego de 8 años de prisión, y cuando estaba a punto de obtener su libertad para establecer su residencia en un país de asilo, la víctima murió repentinamente en su celda. **El Estado alegó suicidio** y proporcionó al Comité una copia de la autopsia, **pero no explicó las circunstancias de la muerte,** las cuales, por lo visto, no fueron objeto de una investigación. El denunciante, un pariente de la víctima, presentó evidencias de que la

---

41 Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tesis jurisprudencial 13/2002: DERECHO A LA VIDA, SU PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Febrero de 2002, pág. 589.

42 Corte IDH. Caso Myma Mack Chang vs. Guatemala. Fondo. Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2003, párr.153.

43 Corte IDH. *Caso Vargas Areco* vs. Paraguay. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C. No. 155 párr. 75.

44 Corte IDH. Informe sobre los derechos humanos de las personas privadas de libertad en las Américas. OEA, aprobado por la Corte IDH, el 31 de diciembre de 2011, párr. 270.

hipótesis de suicidio era inverosímil. El Comité consideró al Estado responsable por la muerte, independientemente de que hubiera sido homicidio o suicidio, justificando su decisión de la siguiente manera:

> *"(…) si bien el Comité no puede llegar a una conclusión definitiva sobre si Hugo Dermis cometió suicidio, fue impulsado a cometerlo o fue muerto de otro modo mientras estaba encarcelado,* ***la conclusión ineludible es que, en cualquier circunstancia, las autoridades uruguayas fueron responsables, por acción u omisión, de no haber adoptado medidas adecuadas para proteger su vida*** *conforme exige el párrafo 1 del artículo 6 del Pacto".*[45]

Las negritas, son de esta Comisión.

28. Con base en lo hasta aquí expuesto, es posible advertir que, el Estado estará obligado a rendir cuentas del tratamiento dado a la persona que falleció bajo su custodia[46]. Ya que, cuando una persona es detenida en un estado óptimo de salud, o en condiciones que no impliquen un riesgo inminente a su vida y, con posterioridad muere por causas distintas, incluyendo el suicidio o el descuido de la persona a la que se encomendó su vigilancia, recae en el Estado, el deber de brindar una respuesta satisfactoria y convincente de lo acontecido. Y, en su caso, desvirtuar las alegaciones sobre su responsabilidad, a través de medios de convicción válidos; tomando en cuenta que existe una presunción de responsabilidad estatal sobre lo que ocurra a una persona bajo custodia del Estado.

29. Se concluye entonces que, según lo disponen los ordenamientos jurídicos precitados, el Estado, en su posición de garante de los derechos fundamentales de sus gobernados, está obligado a adoptar las medidas necesarias para proteger y garantizar el derecho a la vida de las personas que se encuentran recluidas en algún centro de detención. Pues no debe soslayarse el hecho de que, la muerte de personas privadas de libertad en centros de reclusión o espacios de detención temporal es consecuencia de la falta de prevención y adopción de las medidas adecuadas para mitigar una situación de riesgo o amenaza. Motivo por el cual, deberán implementarse las acciones preventivas necesarias para evitar que, por acción u omisión, se suprima este derecho.

30. Con relación a tales medidas, el Tribunal Interamericano ha determinado que, para proteger y garantizar el derecho a la vida de las personas privadas de la libertad, éstas abarcan desde aquéllas que favorecen la conservación de un clima de respeto a los derechos humanos, hasta aquellas dirigidas a proteger a los internos de la violencia que pueda suscitarse entre ellos. Pues dichos actos de violencia representan una situación de riesgo inminente tanto para la vida de las personas recluidas, como para la de cualquier persona que se encuentre en dichos establecimientos. Por lo tanto, el Estado debe tener la capacidad de mantener el orden y la seguridad al interior de los centros penitenciarios y así, garantizar la seguridad de las y los internos en todo momento, así como de las personas que los visitan y de las propias que laboran en ellos.

31. En línea con lo anterior, en el contexto interno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ha pronunciado sobre el deber del Estado como garante de los derechos de las personas privadas de su libertad, y ha sostenido que*: "además de la prohibición a la privación de la vida, el Estado tiene la obligación en el ámbito legislativo, judicial y administrativo de adoptar medidas positivas para preservar la existencia, por lo que se considera transgresión al derecho a la vida no sólo cuando una persona es privada de ésta, sino también cuando se omite adoptar las medidas aludidas para preservarla o para minimizar el riesgo de que la pierda a manos del Estado o de otros particulares*.[47]

32. Bajo ese entendido, se advierte que las autoridades estatales, están obligadas a realizar todas aquellas acciones necesarias para garantizar y preservar la vida de las personas bajo su control, cuidado y custodia. Por tanto, el Estado se encuentra compelido a prevenir de

---

45 Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, *Caso Dermit* vs. Uruguay, párr. 9.2.

46 Corte IDH. Informe sobre los derechos humanos de las personas privadas de libertad en las Américas. OEA, aprobado por la CIDH, el 31 de diciembre de 2011, párr. 270: Corte IDH. Caso Cárcel de Urso Branco respecto Brasil. Medidas Provisionales. Resolución del 18 de junio de 2002, Considerando 8; European Court of Human Rigths. Case of Salman v Turkey. Application 21986//93. Judgment of june 27, 2000. Grand Chamber.

47 Tesis aislada P. LXI/2010, Derecho a la vida. Supuestos en que se actualizará su transgresión por parte del Estado. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época, t. XXXIII, enero 2011, pág. 24.

manera razonable aquellas situaciones de riesgo que pudieran conducir, aún por omisión, a la supresión de la inviolabilidad del derecho a la vida; ya sea por otros particulares o por servidores públicos.

III. Del derecho a la integridad personal.

33. Esta Comisión Estatal, asume como suyo el criterio sustentado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el sentido de que, el derecho a la integridad personal, es aquél que tiene todo sujeto para no sufrir tratos que afecten su estructura corporal, sea física, fisiológica o psicológica, o cualquier otra alteración en el organismo que deje huella temporal o permanente, que cause dolor o sufrimiento grave con motivo de la injerencia o actividad dolosa o culposa de un tercero. Dicho criterio, fue asumido por el Organismo Nacional, mediante el contenido de la Recomendación 69/2016, de fecha 28 de diciembre de 2016 y es compartido por este Organismo Autónomo, debido a que abarca aspectos relacionados con el derecho a la integridad y a la dignidad de la persona.

34. Motivo por el cual, es oportuno enfatizar que, a pesar de que ni la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ni la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, o el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconocen expresamente el derecho a la integridad personal como tal; es evidente que la integridad personal es el bien jurídico cuya protección constituye el fin y objetivo principal de la prohibición de tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanas o degradantes, previstas en el artículo 5, de la Declaración Universal y 7 del Pacto. Por lo tanto, si relacionamos las disposiciones anteriores, con el contenido del artículo 3°, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que establece que, todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona; se puede inferir que, de dicho precepto, se desprende que la obligación de velar por el respeto y garantía de los derechos humanos corresponde al Estado, como ente garante de éstos.

35. Por su lado, la Declaración Americana de Derechos Humanos, no sólo carece de una disposición que reconozca el derecho a la integridad personal, sino que también adolece de una prohibición expresa de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. No obstante, como ya se indicó en líneas precedentes, su primer artículo consagra el derecho de toda persona a la vida, la libertad y a la seguridad de su persona. Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que el concepto de seguridad personal comprende la integridad personal, a guisa de ejemplo, conviene citar el siguiente razonamiento:

> *"(…) que la tortura física o moral no se justifica en modo alguno, por ser atentatoria contra la dignidad humana y viola la integridad de la persona, cuya defensa está consagrada en el artículo 1 de la Declaración Americana".*[48]

36. En tanto que, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sí consagra expresamente el derecho a la integridad personal y hace un aporte valioso a la definición de su contenido, al precisar que comprende la integridad física, psíquica y moral, mediante el texto del artículo 5.1. Aunado a ello, el derecho a la integridad, la prohibición de tortura y los derechos de los reclusos a un trato digno y humano están plasmados en distintos párrafos del artículo 5 de la mencionada Convención. Y, como resultado de lo anterior, mediante el precepto 1.1 dicho instrumento compromete a los Estados a asumir el compromiso de respetar los derechos y libertades reconocidos en ella, así como de garantizar su libre y pleno ejercicio, a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna.

37. Dichas obligaciones generales de respeto y garantía de los derechos humanos, vinculantes para el Estado con respecto a toda persona, implican para éste un mayor nivel de compromiso al tratarse de personas en situación de riesgo o vulnerabilidad.[49]Tan es así que, aunado a las normas que tutelan la integridad de toda persona, la normativa internacional establece otras que tienen el objetivo de proteger la integridad de las personas privadas de libertad. De esta manera, el párrafo 2 del artículo XXV de la Declaración Americana, el párrafo 1 del artículo 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

---

48 CIDH, *Diez años de actividades*, pp. 337. Véase también el informe de la CIDH sobre la situación de los solicitantes de asilo en Canadá, infra.

49 CIDH, Informe sobre los derechos humanos de las personas privadas de libertad en la Américas, párr. 46.

y el párrafo 2 del artículo 5 de la Convención Americana consagran el derecho genérico a un trato humano, lo que se traduce un trato respetuoso de la dignidad de la persona humana. Los dos tratados también contienen normas más específicas relativas al trato de distintas categorías de reclusos, en particular la separación de reclusos según su condición jurídica, sexo y edad, y la rehabilitación de reos condenados.

38. Lo anterior, significa que, mientras que el derecho genérico a un trato humano es reconocido en cuanto derecho de toda persona privada de libertad, las demás disposiciones sobre el trato de reclusos son derechos propios de personas privadas de libertad por motivos de índole penal. En lo atinente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos al resolver el caso "Loayza Tamayo", citó una sentencia de la Corte Europea, y manifestó su acuerdo con la conclusión de dicho Tribunal, consistente en que:

> *"La infracción del derecho a la integridad física y psíquica de las personas es una clase de violación que tiene diversas connotaciones de grado y que abarca desde la tortura hasta otro tipo de vejámenes o tratos crueles, inhumanos o degradantes cuyas secuelas físicas y psíquicas varían de intensidad según los factores endógenos y exógenos que deberán ser demostrados en cada situación concreta."* [50]

39. En ese orden de ideas, es dable señalar que, el derecho de las personas privadas de libertad a ser tratadas humanamente y con el debido respeto a la dignidad inherente a su persona, constituye el derecho cuya alegada violación origina más denuncias. En cuanto a ello, en 1992 el Comité de Derechos Humanos, adoptó una nueva Observación General sobre el artículo 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y destacó que el derecho a un trato digno y humano, no se limita a los presos, sino que se extiende a toda persona privada de libertad *"en virtud de las leyes y la autoridad del Estado"*[51]. Aunado a ello, el Comité sostuvo que el derecho a un trato digno y humano es un añadido a los demás derechos fundamentales de la persona, los cuales deben reconocerse y respetarse en la medida en que los requisitos legítimos de la privación de libertad lo permiten; motivo por el cual *"las personas privadas de libertad gozan de todos los derechos enunciados en el Pacto sin perjuicio de las restricciones inevitables en condiciones de reclusión."* [52]

40. De su lado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en coincidencia con el Comité, mediante su decisión en el caso Edwards, consideró responsable al Estado no sólo del derecho de los presos a un trato humano, sino también del derecho de toda persona a la salud, consagrado por el artículo XI de la Declaración Americana de Derechos Humanos.[53] Dicho principio, ha sido reiterado y ampliado por la propia Comisión en decisiones recientes, mediante las cuales ha sustentado que: "*las normas mínimas establecidas en conformidad con los artículos [sic] 5(1) y 5(2) de la Convención (…) se aplican sin tener en cuenta la naturaleza del comportamiento por el cual la persona en cuestión ha sido encarcelada independientemente del nivel de desarrollo del Estado (…)".*[54] Además, la Comisión también destacó la importancia del derecho a la integridad, al resolver el caso Támez contra Brasil, y sostuvo que el derecho a la integridad y al trato digno, es uno de los más importantes predicados de la responsabilidad internacional de los Estados en relación con los derechos humanos el velar por la vida y la integridad física y mental de las personas bajo su custodia.

41. Tal es el estado de vulnerabilidad e institucionalización en el que se ven colocadas las personas privadas de libertad, que los Estados han propiciado la elaboración de un número importante de instrumentos normativos para la salvaguarda específica de sus derechos fundamentales, siendo los más relevantes: las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos de 1955 (Reglas Nelson Mandela), el Conjunto de Principios para la Protección de todas las Personas Sometidas a Cualquier forma de Detención o Prisión de 1988, los Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos de 1990, la Declaración de Arusha sobre Buenas Prácticas Penitenciarias, y las Reglas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de las Reclusas y Medidas No Privativas de la Libertad para las Mujeres Delincuentes (Reglas de Bangkok), entre otras.

---

50 Corte IDH, *Caso Loayza Tamayo*, párr. 57.

51 Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Observación General No. 21, que sustituy la No. 9 de 1982.

52 Ídem.

53 Corte IDH, *Caso Edwards y otros* vs. Barbados, párr. 194 (2001).

54 Corte IDH, *Caso Knights y otros* vs. Jamaica, párr. 126 (citando las decisiones de la Corte Europea en el caso Ahmed c. Australia y del Comité de Derechos Humanos en Mukong c. Camerún). Ver también Edwards c. Barbados, párr. 194.

42. En lo que atañe al derecho a la integridad, las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos (Nelson Mandela), el Conjunto de Principios para la Protección de todas las Personas Sometidas a Cualquier forma de Detención o Prisión y los Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos, establecen en forma genérica que, **cualquier persona privada de la libertad,** ya sea **que se encuentre detenida**, arrestada o compurgando una pena de prisión, **será tratada con pleno respeto a la dignidad humana**. Correlativamente, el Conjunto de Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, reconocen que todas las personas privadas de su libertad que estén sujetas a la jurisdicción de un Estado deberán ser tratadas humanamente, con absoluto respeto a su dignidad personal, derechos y garantías fundamentales. De manera adicional, dicho instrumento establece la obligación del Estado consistente en proteger a éstas contra todo tipo de amenazas, actos o conductas que tengan como finalidad anular la personalidad o disminuir la capacidad física o mental de la persona.[55]

43. Así pues, con relación a la obligación del Estado como garante de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad, éste es el sujeto obligado a proteger el derecho a la vida y a la integridad personal, por lo que al ser también responsable de los establecimientos de detención, es el garante de estos derechos de los detenidos.[56] Tan es así que, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha sostenido de manera reiterada que, de las obligaciones generales de respetar y garantizar los derechos, derivan deberes especiales, determinables en función de las particulares necesidades de protección del sujeto de derecho, ya sea por su condición personal o por la situación específica en que se encuentre.[57]

44. Igualmente, la Corte ha sustentado el criterio de que, frente a las personas privadas de su libertad, el Estado se encuentra en una posición especial y reforzada de cuidado, toda vez que las autoridades penitenciarias, ejercen un fuerte control o dominio sobre las personas que se encuentran sujetas a su custodia. De este modo, se produce una relación e interacción especial de sujeción entre la persona privada de libertad y el Estado, caracterizada por la privativa intensidad con que el Estado puede regular sus derechos y obligaciones y por las circunstancias propias del encierro, en donde al recluso se le impide satisfacer por cuenta propia una serie de necesidades básicas que son esenciales para el desarrollo de una vida digna.[58]

45. Bajo dicha perspectiva, este Organismo Autónomo concluye que, **cuando el Estado priva de la libertad a una persona, asume una responsabilidad especial relacionada con el respeto y la garantía de sus derechos; ya que, tanto la seguridad como la integridad de éstas, queda bajo su custodia**. Al respecto, la Corte Interamericana ha establecido que existen derechos como la vida, la integridad, el debido proceso, entre otros, cuya limitación o restricción se encuentra proscrita, bajo el entendido de que, toda persona privada de su libertad tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con la dignidad inherente al ser humano y, por ende, el Estado debe garantizarle el derecho a la vida y a la integridad personal. Lo anterior, hace factible concluir que, el Estado, como responsable de los establecimientos de detención, es el garante de tales derechos en favor de las personas detenidas.[59]

46. En el caso particular del Estado Mexicano, a partir de la reforma constitucional del año 2011, mediante el texto del artículo 1°, párrafos, primero y tercero, de la Constitución General de la República, se definió claramente la obligación del Estado garante, respecto de la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos, al indicar que *“todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.”*[60] Consecuentemente, todas las

---

55 Principio 1 del Conjunto de Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de la Libertad en las Américas.

56 Corte IDH, *Caso Neira Alegría y otros* vs. Perú, Sentencia de 19 de enero de 1995, párr. 60.

57 Corte IDH, *Caso Vélez Loor* vs. Panamá, Sentencia de 23 de noviembre de 2010 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), párr. 98

58 Ídem, párr.152.

59 Corte IDH, *Caso Neira Alegría* y otros vs. Perú, Sentencia de 29 de enero de 1995, Serie C No. 20, párr. 60.

60 Ídem, art.1°.

autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Por consiguiente, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.[61]

47. Luego entonces, en el marco constitucional interno, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contempla que el respeto a los derechos humanos es un pilar fundamental de nuestro sistema normativo; por lo tanto, se puede concluir que, el Estado es el garante de la seguridad de quienes se encuentren bajo su custodia en los centros penitenciarios del país, así como en cualquier establecimiento de detención.[62] Entonces pues, una de las funciones primordiales del Estado, será garantizar el respeto a los derechos humanos de todas las personas que se encuentren sujetas a cualquier forma de detención. Bajo esa premisa, se advierte que, el Estado, tiene la obligación de salvaguardar los derechos de las personas privadas de su libertad, sin perjuicio de las restricciones inevitables asociadas a las condiciones de reclusión; pues, al encontrarse éstas bajo su resguardo, no hay ni puede haber ninguna razón para que éste, se sustraiga de su deber perentorio de tutelar la vida e integridad de las personas que se hallan sujetas a su control, y que carecen por sí mismas, de capacidad efectiva de autodeterminación y defensa.

48. Respecto a este tema, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que, la responsabilidad del Estado, respecto a garantizar el derecho a la integridad de las personas privadas de su libertad. Además, en el Caso Tibi vs. Ecuador, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que, el Estado tiene además el deber de investigar, sancionar y reparar toda violación a este derecho cometido en perjuicio de las personas que se encuentran bajo su custodia.

49. Por lo cual, debe de iniciar de oficio y de manera inmediata una investigación efectiva que permita identificar, juzgar y sancionar a los responsables de dichas agresiones. Por consiguiente, *“el Estado es responsable de la observancia del derecho a la vida de toda persona bajo su custodia, precisamente en su condición de garante de los derechos consagrados en la Convención Americana; ya que, como lo ha señalado este Tribunal, si bien el Estado tiene el derecho y la obligación de garantizar su seguridad y mantener el orden público, su poder no es ilimitado, pues tiene el deber, en todo momento, de aplicar procedimientos conformes a Derecho y respetuosos de los derechos fundamentales, a todo individuo que se encuentre bajo su jurisdicción”.*[63]

50. En conclusión, este Organismo estima pertinente destacar que el Estado, como garante de los derechos fundamentales de los gobernados, tiene la obligación de prevenir aquellas situaciones que pudieran conducir por acción, incluso u omisión, a la supresión de la inviolabilidad del derecho a la vida y a la integridad personal. Lo cual implica que, **si una persona es detenida en buen estado de salud y posteriormente muere, recae en el Estado la obligación de proveer una explicación satisfactoria y convincente de lo sucedido** y desvirtuar las alegaciones sobre su responsabilidad, mediante elementos probatorios válidos, pues en su posición de garante, **el Estado tiene tanto la responsabilidad de garantizar los derechos del individuo bajo su custodia, como la de proveer la información y las pruebas relacionadas con el destino que ha tenido la persona detenida**.[64]

IV. De la violación del derecho a la vida e integridad personal, en perjuicio de VD.

51. En el caso concreto, este Organismo recopiló evidencias suficientes que acreditan que, el Estado, incumplió con su función reforzada como ente garante de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad; específicamente, en agravio del señor **VD†**, pues se tiene debidamente comprobado que su deceso aconteció mientras se encontraba detenido en los separos de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de

---

61 Ídem.

62 Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Recomendación 04/2016 de fecha 25 de febrero de 2017, párr. 29.

63 Corte IDH, *Caso Juan Humberto Sánchez* vs. Honduras, Sentencia de 7 de junio de 2003, párr. 111

64 Ídem.

Zacatecas, ubicadas en el Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas, precisamente bajo la custodia del Estado, según se desprende de las constancias que integran el sumario. Vulneración que se atribuye de manera directa a la omisión en la garantía y protección de dichos derechos, por parte del personal que, en fecha 26 de junio de 2020, cubría la segunda guardia en dichas instalaciones.

52. En ese orden de ideas, esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, en su calidad de Órgano de Estado, responsable de la protección y defensa de los derechos humanos en el territorio zacatecano, cumplió con su obligación constitucional de investigar los hechos, al advertir que la muerte del señor **VD†** se debió a la omisión en el deber de cuidado que debieron haber cumplido los funcionarios estatales adscritos a dicha corporación, que se encontraban de turno en fecha 26 de junio de 2020, al mando del **INSPECTOR JEFE AR1**, pues el sometimiento o especial sujeción en el que se encontraba el agraviado, no justifica de ningún modo, el detrimento o menoscabo de sus derechos fundamentales, como en el caso sucedió con la supresión de su derecho a la vida.

53. Entonces pues, en cumplimiento a lo ordenado por la regla 71 de las Reglas Mandela[65], disposición que mandata que, con independencia de que se inicie investigación interna, el Director de cualquier centro penitenciario o establecimiento de detención deberá notificar sobre el fallecimiento, desaparición o lesión grave de un interno a una autoridad judicial, u otra que sea competente e independiente de la que administre el centro, siempre y cuando cuente con facultades de investigación, el **INSPECTOR JEFE AR1**, informó oportunamente a la Representación Social sobre el deceso del agraviado.

54. Así las cosas, de conformidad con lo ordenado por los diversos instrumentos jurídicos que sustentan la presente Recomendación, con fundamento en el Principio 34, del Conjunto de Principios para la Protección de todas las Personas Sometidas a Cualquier forma de Detención o Prisión[66], y además con base en las facultades conferidas por la ley que rige el actuar de esta Comisión, se inició la investigación de los hechos de manera oficiosa. Asimismo, de los autos que integran el sumario, este Organismo dio cuenta de que, con motivo de la notificación realizada por el **INSPECTOR JEFE AR1,** el Ministerio Público inició su indagación correspondiente, tal y como se desprende del acta de aviso de hechos probablemente delictivos, elaborada las **21:30** horas del día 26 de junio de 2020, por el **C. PI7**, Policía Primero de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas; originándose la carpeta de investigación marcada con el número [...], actualmente a cargo de la **SPC6**, Agente del Ministerio Público, adscrita a la Unidad Especializada en Investigación Mixta número VII del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas.

55. En dicho documento, el **C. PI7**, Policía Primero de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, asentó que a las **18:30 horas** del día de la fecha, recibió aviso del **INSPECTOR JEFE AR1** quien le informó que, en una de las celdas de la corporación, se encontraba una persona del sexo masculino sin vida, quien se había suicidado colgándose con un trozo de tela. De modo tal que, personal de la corporación en comento, se hizo presente en el área, constatando que ya se encontraba el **DRF1**, Médico Legista, adscrito al Departamento de Medicina Legal de la Dirección de Servicios Periciales, tratando de reanimar a dicha persona, la cual, se encontraba en posición decúbito dorsal, quien ya no contaba con signos vitales. En el acta, el Policía Primero asentó también que, en el acto, entrevistó al **INSPECTOR JEFE PI5**, elemento

---

65 Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, 1. “Sin menoscabo de que se inicie una investigación interna, el director del establecimiento penitenciario comunicará sin dilación todo fallecimiento, desaparición o lesión grave de un recluso a una autoridad judicial u otra autoridad competente que sea independiente de la administración del establecimiento penitenciario y esté facultada para llevar a cabo investigaciones expeditas, imparciales y efectivas de las circunstancias y causas de ese tipo de ca sos. La administración del establecimiento penitenciario cooperará plenamente con esa autoridad y garantizará la preservación de todas las pruebas. 2. La obligación enunciada en el párrafo 1 de esta regla se aplicará igualmente siempre que existan motivos razonables para considerar que en el establecimiento penitenciario se ha cometido un acto que constituya tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, independientemente de que se haya recibido o no una denuncia formal. 3. Siempre que existan motivos razonables para considerar que se ha cometido alguno de los actos mencionados en el párrafo 2, se tomarán medidas de inmediato para velar por que ninguna persona que pudiera estar involucrada participe en la investigación o mantenga contacto con los testigos, la víctima o la familia de esta”.

66 “Si una persona detenida o presa muere o desaparece durante su detención o prisión, un juez u otra autoridad, de oficio o a instancias de un miembro de la familia de esa persona o de alguna persona que tenga conocimiento del caso,

investigará la causa de la muerte o desaparición. Cuando las circunstancias lo justifiquen, se llevará a cabo una investigación iniciada de la misma manera cuando la muerte o desaparición ocurra poco después de terminada la detención o prisión. Las conclusiones de esa investigación o el informe correspondiente serán puestos a disposición de quien lo solicite, a menos que con ello se obstaculice la instrucción de una causa penal en curso”.

policiaco que señaló de manera general que, siendo las **18:20** horas de ese mismo día, al arribar a su oficina, ubicada frente a separos de la corporación, se percató de que en una de las celdas se encontraba el agraviado en posición sedente, quien estaba sujeto con un pedazo de tela amarrado a su cuello por un extremo y, por el otro, a la cama superior de la litera ubicada en la celda.

56. Adicionalmente, debe notarse que, en cumplimiento a la Regla 69[67], de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, (Reglas Nelson Mandela), el personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, notificó a la **VI1** sin mayor tardanza, sobre el deceso del **VD†**, circunstancia que es posible corroborar con la compulsa de la carpeta de investigación [...] de la que se desprende su declaración en calidad de testigo de identidad e identificación de cadáver del agraviado, realizada a las **05:00 horas** del día **27 de junio de 2020**, ante la **AMPPF**, Agente del Ministerio Público número 9 de Atención Permanente del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas.

57. En esa diligencia, la concubina del agraviado refirió los antecedentes de la detención de éste y, posteriormente, especificó que alrededor de las **17:30** horas del día anterior, recibió llamada telefónica por parte del personal de dicha Dependencia para informarle que debía acudir para que se le practicara certificado médico, como parte de la integración de la carpeta de investigación que se iniciara en contra del agraviado; por lo que, al encontrarse en las instalaciones de la Casa de Justicia, recibió la noticia del fallecimiento de su esposo. Por consiguiente, esta Institución resuelve que, por lo que concierne a la obligación del Estado de informar sin dilación, sobre el fallecimiento en su caso, de cualquier persona bajo su custodia, no existió retardo en la notificación que debe practicarse sobre el particular, a sus familiares.

58. Por otro lado, este Organismo resalta también que, la investigación iniciada por el Ministerio Público, cumple con los estándares internacionales en materia de investigaciones de muertes ocurridas bajo la custodia del Estado. Es decir, de la integración de la referida carpeta de investigación [...] se advierte que, la **SPC4**, Fiscal del Ministerio Público que efectuó los primeros actos de investigación, atendió las disposiciones del Protocolo de Minnesota[68], además de ordenar la aplicación del mismo, a las autoridades coadyuvantes de la indagación.

59. Lo anterior, se destaca en la inteligencia de que el objeto de dicho Protocolo, radica precisamente en la protección del derecho a la vida, la promoción de la justicia, la rendición de cuentas y la reparación mediante la promoción de **una investigación eficaz de toda muerte potencialmente ilícita** (como en el caso que nos ocupa), o sospecha de desaparición forzada. Por lo tanto, el Protocolo de Minnesota se aplica a la investigación de toda “muerte potencialmente ilícita”, por lo que en éste se prevén principalmente situaciones en que:

- La muerte puede haber sido causada por actos u omisiones del Estado, de sus órganos o agentes, o puede ser atribuible al Estado, en violación de su obligación de respetar el derecho a la vida[69].
- La muerte sobrevino cuando la persona estaba detenida, o se encontraba bajo la custodia del Estado, sus órganos o agentes.
- La muerte podría ser resultado del incumplimiento por el Estado de su obligación de proteger la vida.

---

67 Ídem, Regla 69. “En caso de fallecimiento de un recluso, el director del establecimiento penitenciario informará inmediatamente a sus familiares más allegados o a la persona designada como contacto para casos de emergencia. Ante un supuesto de enfermedad o lesión grave o de traslado de un recluso a un centro hospitalario, el director deberá notificar a las personas que el recluso haya designado para recibir información relacionada con su estado de salud. Se respetará la solicitud expresa Primera parte, del recluso de que no se informe a su cónyuge o familiar más cercano en caso de enfermedad o lesión”.

68 El Protocolo de Minnesota sobre la Investigación de Muertes Potencialmente Ilícitas (2016) establece una norma común de desempeño en la investigación de una muerte potencialmente ilícita y un conjunto común de principios y directrices para los Estados, las instituciones y las personas que participen en la investigación.

69 Véanse, por ejemplo, el artículo 6, párrafo 1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966; el artículo 6 de la Convención sobre los Derechos del Niño de 1980 y el artículo 1 de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948; los artículos 12 y 13 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura de 1984; el artículo 10 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas de 2006; los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, principios 6, 22 y 23; los Principios de las Naciones Unidas relativos a una Eficaz Prevención e Investigación de las Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias o Sumarias, principio 9; y el Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión, principio 34. En cuanto a las situaciones de conflicto armado internacional, véanse el artículo 121 del Convenio de Ginebra relativo al trato debido a los prisioneros de guerra (Convenio III), 1949, y el artículo 131 del Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra (Convenio IV), 1949.

60. Como ejemplo del segundo y tercer supuestos, aplicable a esta Recomendación, es dable citar, por ejemplo, **todas las muertes de personas detenidas** en prisiones, en otros lugares de reclusión (oficiales y de otro tipo) y en otras instalaciones donde el Estado ejerce un mayor control sobre su vida, entre los que figuran también los hospitales psiquiátricos, las instituciones para niños y ancianos y los centros para migrantes, apátridas o refugiados. Así como, **cualquier situación en que un Estado no ejerza la diligencia debida para proteger a una persona o personas contra amenazas externas previsibles** o actos de violencia por agentes no estatales[70].Ello, en virtud de que, como ya se apuntó, el derecho a no ser privado arbitrariamente de la vida es un derecho fundamental y universalmente reconocido que es aplicable en todo momento y en toda circunstancia. Por lo que, en ese entendido, no se permite ninguna suspensión, ni siquiera durante un conflicto armado o en situaciones excepcionales[71].

61. Consecuentemente, la obligación de investigar, es una parte esencial de la defensa del derecho a la vida[72], en la medida de que hace efectivos en la práctica, los deberes de respetar y proteger el derecho a la vida; además, promueve la rendición de cuentas y la reparación cuando pueda haberse vulnerado ese derecho sustantivo. Por tal motivo, las investigaciones y los enjuiciamientos son esenciales para prevenir futuras vulneraciones y promover la rendición de cuentas, la justicia, el derecho a la reparación y la verdad, así como el estado de derecho.[73] Por consiguiente, esta Comisión resuelve que, en lo que a este tópico atañe, la referida Fiscal cumplió con las obligaciones impuestas por el Protocolo de Minnesota, circunstancia que se verifica con el análisis de las diversas constancias que integran la carpeta de investigación [...] y se sustentan principalmente con el informe que, en vía de colaboración, rindió la **DRF2**, Perita Médica Legista, adscrita al Departamento de Medicina Legal de la Dirección de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, recibido en este Organismo, en fecha 10 de agosto de 2021.

62. Agotadas las obligaciones del Estado, una vez que sobreviene la muerte de una persona que se encontraba bajo su custodia, como en el caso ocurrió con el **VD†**, este Organismo procede a continuación, a analizar las omisiones en que incurrieron los elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas que, en fecha 26 de junio de 2020, cubrían la segunda guardia en el Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas, a saber: **INSPECTOR JEFE AR1**, al mando de los **POLICÍAS PRIMEROS DE INVESTIGACIÓN PI1, PI2, PI3** y **PI4**, según se desprende primariamente, del informe de investigación ministerial que obra en la carpeta de investigación [...], suscrito por el **INSPECTOR JEFE PI10**, adscrito a dicha corporación, y luego, del informe que, por instrucciones del **SJAR**, Fiscal General de Justicia del Estado de Zacatecas, rindió la **FMPT**, Fiscal Especializada en Derechos Humanos, Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes, remitió en fecha 10 de agosto de 2020.

63. Bien, de la entrevista que en fecha 26 de junio de 2020, le fue recabada al **INSPECTOR JEFE AR1**, por parte de la **C. PI6**, Policía Primera de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, cuyo contenido ratificó ante esta Comisión, en fecha 11 de agosto de ese mismo año, se desprende que éste recibió la guardia a las 09:00 horas y asignó a sus elementos los siguientes servicios:

- **PI1**: radio.
- **PI2** y **PI3**: puerta de acceso a Casa de Justicia.
- **PI4**: Sistema de Emergencias 911.

---

70 Véase, por ejemplo, la observación general núm. 31 del Comité de Derechos Humanos sobre la índole de la obligación jurídica general impuesta a los Estados partes en el Pacto (CCPR/C/21/Rev.1/Add.13), 26 de mayo de 2004, párr. 8.

71 De conformidad con el artículo 15 del Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950 (CEDH), en caso de guerra o de otro peligro público que amenace la vida de la nación, cualquier Estado parte podrá tomar medidas que suspendan la observancia plena del derecho a la vida (art. 2) siempre que se trate de actos de guerra lícitos y en la medida estricta en que lo exija la situación, y a condición de que tales medidas no estén en contradicción con las restantes obligaciones que dimanan del derecho internacional.

72 Véase, por ejemplo, Tribunal Europeo de Derechos Humanos, McCann y otros c. el Reino Unido, sentencia (Gran Sala), 27 de septiembre de 1995, párr. 161; Corte IDH, Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) Vs. Venezuela, sentencia, 5 de julio de 2006, párr. 66; Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, observación general núm. 3 sobre el derecho a la vida, noviembre de 2015, párrs. 2 y 15; Comité de Derechos Humanos, observación general núm. 31, párrs. 15 y 18.

73 Informe del Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias a la Asamblea General (A/70/304); Preámbulo de los Principios y directrices básicos de las Naciones Unidas sobre el derecho a interponer recursos y obtener reparaciones.

64. En dicha entrevista, el **INSPECTOR JEFE AR1** manifestó que, a las **13:20 horas** de ese mismo día, ingresó el **VD†**, quedando formalmente interno en separos, a las **13:30 horas**; dicha información se sustenta con las versiones que, al respecto, aportaron el **INSPECTOR JEFE PI5** y los **POLICÍAS PRIMEROS PI8, PI1** y **PI2**, quienes en entrevista recabada dentro de la carpeta de investigación [...], (la cual ratificaron en contenido ante esta Comisión), también se refirieron al horario en que ingresó el agraviado a los separos de la corporación. Adicionalmente, es importante destacar que, esta información, refuerza con la boleta de internación correspondiente que obra en autos de la carpeta de investigación [...], en la cual este Organismo advirtió que el horario de recepción, en efecto, aconteció a las **13:20 horas** del 26 de junio de 2020, por lo que, en ese sentido, la información suministrada por el agente policiaco, es fidedigna en lo que a dichos horarios se refiere.

65. Aunado a lo anterior, el **INSPECTOR JEFE AR1** detalló que, a partir de que el agraviado quedó interno, se realizaron recorridos de vigilancia, no obstante, este Organismo hace notar que, pese a ser el Agente a cargo, éste no especificó qué personal se hizo cargo de tales recorridos, ni con qué frecuencia; como sí lo hizo el **C. PI1**, Policía Primero de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, quien al igual que los demás elementos a los que se tomó comparecencia por este Organismo, ratificó su entrevista Ministerial. En dicha diligencia, el elemento aseguró que, a partir de que el agraviado quedó interno en separos, realizó rondines de vigilancia cada media hora, a razón de: las **14:30, 15:00, 15:30** y **16:00 horas**, siendo relevado en dicho encargo, a esa hora, por el referido **INSPECTOR JEFE AR1.** En esa tesitura, esta Comisión advierte que el referido Inspector Jefe, en realidad no participó de tales rondines, tan es así que, no fue capaz de establecer los horarios en que el **C. PI1**, realizó dicha actividad; con lo cual se actualiza el incumplimiento de su deber reforzado de cuidado, en agravio del **VD†**,

66. Continuando con la información vertida por el **INSPECTOR JEFE AR1**, el agente policiaco especificó que, luego de que a las **16:20 horas** recibió oficio de libertad de otra persona que también se encontraba detenida, solicitó apoyo a un elemento para que lo trasladara a efecto de que se le practicara certificado médico, por lo que se continuó con los rondines (nótese nuevamente que no pormenorizó si dichos rondines los realizó él o el **C. PI1**, Policía Primero), en virtud de que aún había 3 personas detenidas, incluyendo al agraviado. Finalmente, el **INSPECTOR JEFE AR1** precisó que, el **INSPECTOR PI5** y el **PI8**, elementos de la Policía de Investigación, adscritos a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Razón de Género, realizaron diversas diligencias y, a las **18:20 horas** de ese mismo día, luego de entrar a su oficina, la cual se ubica enfrente de las celdas de separos, le notificaron que había una persona colgada en una de las celdas; sin embargo, pese a que el **DRF1**, Médico Legista, adscrito al Departamento de Medicina Legal de la Dirección de Servicios Periciales, realizó maniobras de resucitación, ya nada pudo hacer por él.

67. Por su parte, el **INSPECTOR PI5**, agente adscrito a la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos en Razón de Género del este Distrito Judicial, ratificó ante esta Institución, la entrevista que le recabara el **C. PI7**, Policía Primero de Investigación, en relación con la muerte del agraviado. En dicha entrevista, el funcionario coincidió con el dicho de su homólogo y, de la misma manera, relató que, luego de que el agraviado quedó interno en los separos de la corporación, a cargo del **INSPECTOR JEFE AR1**, él se dispuso a realizar diversas diligencias, y luego, al regresar a su oficina, a las **18:20 horas**, observó que una persona del sexo masculino se encontraba en posición sedente y, al acercarse, se percató de que estaba colgada de la base de la litera superior, amarrado con una tira de cobija sujeta al cuello. Motivo por el cual, dio aviso al encargado de la guardia y, una vez abierta la celda, advirtió que se trataba de **VD†**, quien pese a los esfuerzos del **DRF1** ya no contaba con signos vitales.

68. De su lado, el **PI8**, Policía Primero de la corporación en comento, brindó sustento a las entrevistas de los Inspectores Jefes precitados y, del mismo modo, relató que luego de que el agraviado quedó interno en separos de la Policía de Investigación, tanto él como el **INSPECTOR PI5** realizaron diversas diligencias relacionadas con las carpetas de investigación a su cargo, y es a las **18:18 horas** aproximadamente, cuando regresaron a su oficina, que éste le hizo saber que dentro de una de las celdas se encontraba colgada una

persona. Asimismo, coincidió con el referido Inspector Jefe, al referir que se dio aviso al encargado de la guardia y que luego de que se le brindaron primeros auxilios, el médico les notificó que el agraviado había perdido la vida.

69. Como puede advertirse, no existe controversia entre las manifestaciones del personal de la Policía de Investigación que se han analizado hasta este punto. El resultado de la necropsia practicada al cadáver de **VD†**, por parte de la **DRF2**, Perito Médica Legista, adscrita al Departamento de Medicina Legal de Fresnillo, Zacatecas, arrojan que la causa de muerte fue **asfixia por ahorcamiento.** Es decir, este Organismo advierte la omisión, bajo un estándar reforzado de especial diligencia, en la protección de su vida e integridad, en virtud de que éste se encontraba en un centro de reclusión a cargo del propio Estado, lugar en donde éste, evidentemente ejercía un mayor control sobre su vida y debió preverse toda situación que, por acción de terceros o de sí mismo, pudiera vulnerar en su perjuicio, tales prerrogativas.

70. En cuanto a este tópico, esta Comisión ha reiterado en diversas Recomendaciones en las que se ha analizado el derecho a la vida a integridad de un gobernado, sometido a cualquier forma de detención o de prisión, que el Estado debe tomar medidas de carácter positivo y/o negativo, tendentes a la salvaguarda de sus derechos fundamentales, en especial, de su derecho a la vida a integridad. Por lo que, en ese sentido, cuando una persona es privada de su libertad, motivada por cualquier procedimiento administrativo y/o penal, los agentes del Estado encargados de su resguardo, asumen un papel reforzado en la salvaguarda de esos derechos, viéndose obligados a una vigilancia constante, ya sea de manera directa, o a través de otros medios, como las cámaras de vigilancia.

71. Luego entonces, pese a que el **INSPECTOR JEFE AR1**, no estableció la frecuencia con la que se habrían realizado rondines de vigilancia a las celdas de separos de la Policía de Investigación en fecha 26 de junio de 2020, la versión del **C. PI1**, Policía Primero de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas y la del propio **INSPECTOR JEFE AR1**, en el sentido de que se mantuvo vigilancia constante en los separos de la corporación, en fecha 26 de junio de 2020, mientras el agraviado se encontró interno, adquieren sustento con el contenido de la entrevista realizada al **T2**, persona que en fecha 26 de junio de 2020, también estuvo interno en separos de la corporación en comento, y dio cuenta de la vigilancia que hizo el personal de la Policía de Investigación en el área; por ejemplo, manifestó de manera textual: *“…vi que entraban y salían policías a checarnos, como para ver si todo estaba bien o algo así, en sí a estar al pendiente de nosotros…”* (Sic).

72. Entonces pues, los medios de prueba que han sido concatenados hasta este punto de estudio, permiten concluir que, no obstante que el **C. PI1**, Policía Primero de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, sí efectuó diversos rondines al área de separos de la Policía de Investigación, ubicadas en la Casa de Justicia de esta ciudad de Fresnillo, Zacatecas, no es posible establecer la frecuencia con que lo hizo, pese a que él afirme que los realizó cada media hora; así como tampoco, es viable establecer si verdaderamente el **INSPECTOR JEFE AR1** lo relevó en dicha actividad, a las **16:00 horas**. Sin embargo, el caudal probatorio resulta de provecho para arribar a la conclusión de que, al menos desde esa hora, el **VD†** permaneció sin ningún tipo de vigilancia, y fue durante ese lapso de las 16:00 a las 18:20 horas, que perdió la vida; lo cual podrá corroborar con exactitud la Representación Social, una vez que cuente con el resultado del estudio cronotodiagnóstico al cadáver del agraviado, pues dicho dato, aun no obra en autos de la multicitada carpeta de investigación [...].

73. Así las cosas, este Organismo arriba a la conclusión de que, a pesar de que se hayan realizado rondines de vigilancia a los separos de la Policía de Investigación ubicadas en este Distrito Judicial, ya sea por parte del **C. PI1**, Policía Primero de la Policía de Investigación o del **INSPECTOR JEFE AR1**, los mismos se consideran una medida ínfima, que repercutiera en el verdadero cumplimiento del deber reforzado en la protección de la vida e integridad de las personas que, en fecha 26 de junio de 2020, entre las **13:30 horas** y las **16:20**, se encontraban privados de su libertad en dicha área, impactando de manera directa en el caso concreto, en la vulneración del derecho a la vida e integridad, en relación con el deber del Estado garante de las personas privadas de su libertad, en perjuicio del **VD†**; persona que al

encontrarse bajo la custodia del Estado, enfrentaba una situación de vulnerabilidad que obligaba a las autoridades, a emprender medidas extraordinarias para tutelar dichos derechos mediante su vigilancia personal, constante y estrecha, lo que en el caso no ocurrió.

74. La importancia de una vigilancia personal, constante y estrecha, que debió realizarse en los separos de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, ubicadas en Fresnillo, se hacía estrictamente necesaria, en razón de que el momento en que sucedieron los hechos que motivan esta Recomendación, las cámaras ubicadas en el interior de los separos no funcionaban, lo que obligaba entonces al grupo de elementos que en fecha 26 de junio de 2020, estaban al mando del **INSPECTOR JEFE AR1** a que se vigilara de manera directa a los detenidos; sin embargo, se insiste, éste fue omiso en realizar dicha vigilancia o al menos, corroborar que su personal lo hiciera.

75. En lo que atañe al tema las cámaras de vigilancia, este Organismo pudo constatar que éstas no se encontraban en funcionamiento, mediante la inspección de campo realizada en día 30 de junio de 2020, fecha en la que el propio **AR1** manifestó que, a pesar de que se contaba con cámaras, éstas no funcionaban; información que, de manera oficial, fue también aportada por la **FMPT**, Fiscal Especializada en Derechos Humanos, Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes, y que, del mismo modo, se desprende de autos de la carpeta de investigación [...], específicamente del informe de investigación ministerial rendido por el **C. PI10**, Inspector Jefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas y del acta de registro e inspección del lugar del hecho, signada por el **PI9**, Policía Primero de Investigación de dicha corporación.

76. Ahora bien, retomando la investigación *in loco* realizada por personal de esta Comisión en fecha 30 de junio de 2020, el propio **INSPECTOR JEFE AR1** detalló que luego de que el agraviado perdiera la vida, en fecha 26 de junio de ese mismo año, al día siguiente se colocaron cámaras que actualmente se encuentran funcionando debidamente, las cuales son monitoreadas las 24 horas del día por un elemento de la corporación, circunstancia que fue verificada por el citado personal del Organismo en esa misma fecha y que, además, fue informada por la **FMPT**, Fiscal Especializada en Derechos Humanos, Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes, mediante informe de autoridad, rendido el 6 de agosto de 2020.

77. En ese orden de ideas, desde luego que este Organismo no soslaya la medida correctiva de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, de poner en funcionamiento debido las cámaras de vigilancia ubicadas al interior de los separos de la Policía de Investigación, con sede en Fresnillo, Zacatecas; sin embargo, lamenta y señala de manera puntual que, la muerte del agraviado es un acontecimiento que era previsible y que, los elementos de la corporación, al mando del **INSPECTOR JEFE AR1** pudieron haber evitado, de haber efectuado una vigilancia directa, constante y estrecha, en favor de todas las personas detenidas en fecha 26 de junio de 2020. No obstante, como se ha venido evidenciando a lo largo del presente instrumento recomendatorio, los agentes del Estado incumplieron con su deber reforzado, en la protección de los derechos humanos de las personas detenidas, impactando de forma directa en la violación del derecho a la vida a integridad del **VD†**.

78. Por otra parte, esta Institución no pasa por alto el hecho que, la infraestructura con que están construidas las camas que se ubican dentro de los separos de la Policía de Investigación, fueron un factor preponderante que permitió que, sobre los barrotes se colocara un pedazo de tela de cobija de la cual fue encontrado suspendido el cuerpo de **VD†**; lo cual, se considera igualmente inadmisible, en virtud a que la custodia y atención de las personas detenidas deben cumplir con los estándares internacionales y respetar los derechos humanos inderogables de dichas personas. Lo anterior a efecto de garantizar que ninguna persona detenida, pierda la vida al interior de las áreas de detención, sea torturada o maltratada por los elementos policiacos, sea agredida por otros detenidos o por servidor público alguno.

79. Sin embargo, de autos de la carpeta de investigación originada con los mismos hechos que ahora se resuelven, se desprende que, el ahora occiso, utilizó como punto de apoyo la

estructura de las camas literas ubicadas al interior de la celda, cuya construcción pudo verificarse por el personal de esta Comisión, en la inspección de fecha 30 de junio de 2020, por lo cual, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, deberá corregir también esta deficiencia, en aras de que, en lo sucesivo, sucesos como este no vuelvan a ocurrir. Con relación a dicho factor, es importante destacar que, respecto de las consideraciones técnicas y prácticas en que ha de basarse la arquitectura de un centro de reclusión o de detención, la Organización de las Naciones Unidas, tomó como fundamento las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos y, en 2006, a través de la Oficina de Servicios para Proyectos, editó el documento denominado: "Orientaciones Técnicas para la planificación de establecimientos penitenciarios". Documento que este Organismo estima de elemental importancia para que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, lo tome en consideración a la hora de, por ejemplo, tomar decisiones en cuanto a ampliación y/o mejora de las instalaciones de los lugares de detención a su cargo; incluyendo desde luego, aquellas que tengan que atenderse con motivo de esta Recomendación.

80. En dicho documento, la Organización de las Naciones Unidas, destaca la importancia de que los establecimientos penitenciarios y lugares de detención, ofrezcan condiciones seguras, no solo para los internos, sino para el personal que ahí labora, lo cual, deberá incluir una vida digna. Asimismo, puntualiza la importancia de que, conforme a las 13 a 16, 22 (2) y 42 de las Reglas Mandela, se provean una serie de condiciones de vida básicas, tales como: agua, iluminación, saneamiento, entre otras, a un número apropiado de reclusos en un espacio físico vital determinado, la regulación y el control adecuado de movimientos, y la prestación de distintas instalaciones que contribuyan al régimen eficaz de reeducación de los internos.

81. En relación con el tema de la infraestructura penitenciaria, las "Orientaciones Técnicas para la planificación de establecimientos penitenciarios", que puede retomarse en el caso concreto, como un elemento orientador, proponen la **creación de celdas y espacios que carezcan de puntos de ligadura** y ventanas de cristal convencionales; ello, **con la única finalidad de reducir el riesgo de daño a la integridad física de los internos, incluyendo desde luego la salvaguarda de la propia vida**. Aunado a ello, se sugiere que las celdas tengan una visibilidad elevada, a fin de que el personal penitenciario pueda llevar a cabo de manera efectiva, sus labores de vigilancia, desde su posición de garantes de los derechos fundamentales de los internos.

82. En cuanto a este factor, esta Comisión de Derechos Humanos no soslaya la falta de recursos suficientes para albergar a un detenido por celda, o para utilizar materiales que impidan en su totalidad el riesgo de una lesión o daño a su integridad física, incluso por accidente. Sin embargo, tampoco debe soslayarse el hecho de que, la protección de los derechos humanos por parte del Estado debe ser en todo momento progresiva. Por lo tanto, debe a toda costa, mejorarse la infraestructura de los lugares de detención a cargo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, a fin de evitar, por todos los medios, la vulneración del derecho a la vida y a la integridad de las personas detenidas; dada su posición especial de garante de sus derechos fundamentales.

83. En vista de lo anterior, esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, concluye que, la segunda guardia de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, que se encontraba de turno el día 26 de junio de 2020, en las instalaciones de la corporación con sede en Fresnillo, Zacatecas, al mando del **INSPECTOR JEFE AR1**, son responsables del trastocamiento del derecho a la vida a integridad, en relación con el deber del Estado garante de las personas privadas de su libertad, en agravio directo del **VD†**. Ello, en virtud de que ha quedado debidamente probado que éste y los elementos a su cargo, incumplieron con su deber reforzado en la salvaguarda de dichos derechos fundamentales; incumplimiento que se hizo patente con la falta de una vigilancia directa, constante y estrecha, habida cuenta de que las cámaras de seguridad ubicadas en el área, no funcionaban de manera correcta en la fecha en que acontecieron los hechos, a lo cual se suma además, la deficiente construcción de las camas que se ubican dentro de cada una de las celdas de dichos separos.

84. Por último, este Organismo estima necesario abordar el tema de la obligación a cargo del Estado, de suministrar alimentos a las personas que se encuentran detenidas bajo su custodia. Para tales efectos, es preciso establecer que, de acuerdo con el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, el derecho a una alimentación adecuada "…*se ejerce cuando todo hombre, mujer o niño, ya sea solo o en común con otros, tiene* ***acceso físico y económico, en todo momento, a la alimentación adecuada o a medios para obtenerla…"***[74]**.** Evidentemente que, el derecho a la alimentación adecuada, no puede interpretarse como la obligación del Estado de alimentar a cada gobernado, sino de proveer las condiciones necesarias para que las personas puedan utilizar su plena potencialidad para producir o adquirir alimentación adecuada para ellos mismos y sus familias. Sin embargo, **cuando los habitantes no pueden alimentarse con sus propios medios**, por ejemplo, como resultado de un conflicto armado, un desastre natural o **porque se hallan en detención**, el Estado debe suministrar alimentación directamente[75].

85. Entonces pues, si asumimos que los derechos humanos poseen la característica de la interdependencia, es claro el vínculo existente entre el derecho a la vida a integridad, de las personas privadas de su libertad, con su derecho a una alimentación adecuada, en virtud de que su estancia en detención, debe darse en condiciones de dignidad. Tal es así que, la privación o la falta de acceso a alimentación adecuada en la prisión u otras formas de detención puede llegar a constituir en determinados casos, dependiendo de su gravedad, tortura o un trato inhumano y degradante[76]. En lo atinente, y en concordancia con los argumentos anteriores, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Zacatecas, establece de manera puntual en el texto del artículo 32, párrafo quinto que: *"…Las autoridades que tengan bajo su custodia a un detenido por delitos o faltas del orden común, tienen la obligación de proporcionarle alimentación y asistencia médica, con cargo a su presupuesto…"* (Sic).

86. Luego entonces, es posible establecer que, la obligación del Estado, cuando priva de la libertad a una persona, es garantizar que su estancia en detención sea en condiciones dignas, lo que incluye el derecho a recibir alimentos a cargo del propio Estado, en la inteligencia de que, al encontrarse en esa institucionalización, la persona detenida no puede valerse por sí mismo. Sin embargo, en el caso concreto, esta Comisión advirtió, de la entrevista que brindara el **T1**, persona que estuvo en la misma celda que el ahora occiso, a la **C. PI6**, Policía Primera de la Policía de Investigación, que la Fiscalía omite el cumplimiento de dicho deber; lo cual se desprende de sus siguientes afirmaciones: *"…me dijo que tenía hambre y yo le di un burro de los que me habían llevado…"*, *"…cuando me llevaron de comer a mí, le di una torta y un vaso de refresco…"* y *"…él me dijo que si por favor le llamaba a su esposa para que le llevara de comer…".*

87. Lo anterior, es evidencia suficiente para tener por cierto que la Fiscalía General del Estado de Zacatecas, por conducto de la Policía de Investigación, incumple con el deber de suministrar alimentos a las personas que se encuentran detenidas bajo su custodia. Pues las aseveraciones del **T1** las brindó de manera voluntaria, sin presión alguna, a su propio personal, con motivo de la investigación de los mismos hechos que ahora se resuelven, por lo que no se advierten sesgadas o malintencionadas y, por ende, son susceptibles de crear convicción sin lugar a dudas, respecto de dicha omisión por parte de las autoridades. Motivo por el cual, se estima de imperiosa necesidad que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, designe una partida presupuestal, a efectos de dar cumplimento de manera puntual a la obligación de sustituir al propio gobernado al que ha detenido, en el acceso a una alimentación adecuada, de acuerdo a los estándares que se han invocado en párrafos precedentes.

88. En suma, el caudal probatorio que integra el expediente **CDHEZ/287/2020**, permite a este Organismo Tutelador de Derechos Humanos, concluir que, los elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas que se encontraban al mando del **INSPECTOR JEFE AR1**, en fecha 26 de junio de 2020, incumplieron con su deber reforzado en la protección del derecho a la vida a integridad, en

---

74 Véase mayor información en ACNUDH, Folleto informativo Nº 16 (Rev. 1): El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

75 ONU, Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Folleto informativo número 34: El derecho a una alimentación adecuada, pág. 5.

76 Ídem, pág 7.

perjuicio directo del **VD†**. Asimismo, se tiene debidamente probada la responsabilidad institucional de la Fiscalía, en el incumplimiento del deber de suministrar alimentos a las personas que se encuentran bajo su custodia, tal y como lo mandata la norma constitucional local y los instrumentos internacionales que tutelan el derecho a una alimentación adecuada, en beneficio de toda persona.

VIII. DE LAS VÍCTIMAS INDIRECTAS.

El artículo 4°, párrafo segundo, de la Ley de Víctimas del Estado de Zacatecas, establece que, cuando como consecuencia de la comisión de un delito o de violaciones a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, se reconozca una víctima directa, se considerará así a los familiares o aquellas personas físicas a cargo de la víctima directa, que tengan una relación inmediata con ella; en ese entendido, considera como tal, al cónyuge, la concubina o el concubinario, las hijas e hijos de la víctima, los padres y los dependientes económicos de la víctima.

En el presente caso, esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas logró acreditar que **VD†** era hijo de la **VI2** y del **VI3**, según informó la **VI4** a la Representación Social, en su calidad de testigo de identidad y reconocimiento de cadáver del agraviado, a quien reconoció como su hermano; mencionado además que éste, era también hermano de los **VI5 y VI6**.

De la misma manera, este Organismo acreditó el vínculo de concubinato entre **VD†** y la **VI1**, con quien procreó a **M1.**

Finalmente, esta Institución logró acreditar que el **VD†**, era padre de **M2.**

IX. CONCLUSIONES DEL CASO.

1. Esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, reprueba la vulneración del derecho a la integridad personal y a la vida, en relación con el deber del Estado garante, respecto a la muerte de **VD†** lo cual, es atribuible a la omisión del personal de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, durante la segunda guardia del día 26 de junio de 2020, al mando del **INSPECTOR JEFE AR1**, comprendida de las **09:00 horas**, a las **09:00** horas del día siguiente.

2. A la propia Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, en virtud de las omisiones detectadas en la instalación y funcionamiento de las cámaras de vigilancia de los separos de la corporación con sede en el Municipio de Fresnillo, así como en la infraestructura física de las camas de las celdas.

3. De ahí que, para este Organismo, resultó indefectible establecer, la responsabilidad por omisión, atribuible al personal de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, que se encontraba de turno, en el horario y día en que se suscitaron los hechos; primordialmente en el caso del **INSPECTOR JEFE AR1**, elemento que se encontraba a cargo de la guardia; así como del **C. PI1**, Policía Primero de la Policía de Investigación, elemento a cargo de la vigilancia del área de separos, quienes con su actuar negligente, entre otros factores, contribuyeron a la pérdida de la vida del **VD†**.

X. REPARACIONES.

1. De conformidad con lo establecido en los artículos 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 51 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, al acreditarse violación a los derechos humanos de **VD†**, atribuible a servidores públicos de la Dirección de Seguridad Pública de Fresnillo, Zacatecas, la Recomendación formulada al respecto, debe incluir las medidas que procedan para lograr la efectiva restitución de las personas afectadas en sus derechos.

2. Dicha reparación, de conformidad con los Principios y Directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones", adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 2005, las violaciones de derechos humanos deben contemplar, de forma apropiada y proporcional a la gravedad de ésta, una reparación plena y efectiva en las formas siguientes:, restitución, rehabilitación, satisfacción, indemnización, deber de investigar y garantías de no repetición. En el caso en concreto y ante la pérdida fatal, no es posible solicitar la restitución de los derechos humanos conculcados. Las reparaciones se contemplan también en la Ley General de Víctimas, en sus artículos 1, último párrafo, 7, fracción I y II, y particularmente en el texto legal del artículo 26, que establece que "Las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera oportuna, plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva por el daño que han sufrido como consecuencia del delito o hecho victimizante que las ha afectado o de las violaciones de derechos humanos que han sufrido, comprendiendo medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y medidas de no repetición", además por lo previsto en el artículo 27 del mismo ordenamiento legal.

3. La Corte ha señalado que los familiares de las víctimas de violaciones de derechos humanos pueden ser, a su vez, víctimas. Ha considerado violado el derecho a la integridad psíquica y moral de los familiares de las víctimas por el sufrimiento causado por las violaciones perpetradas contra sus seres queridos y las posteriores actuaciones u omisiones de las autoridades estatales, por ello, es de vital importancia que las víctimas reciban la valoración psicológica necesaria para determinar los daños que sufrieron como consecuencia de la vulneración a sus derechos, a través de la vulneración de los derechos de su ser querido, en este caso, a favor de la **VI2** y del **VI3**, en su calidad de padres; de los **VI4, VI5 y VI6**, en su calidad de hermanos; así como de la **VI1, M1** y **M2**, en su calidad de concubina e hijos, según lo acreditó esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas.

A) De la indemnización.

1. La indemnización ha de concederse, de forma apropiada y proporcional a la gravedad de la violación y a las circunstancias de cada caso, por todos los perjuicios económicamente evaluables que sean consecuencia de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos o de violaciones graves del derecho internacional humanitario, tales como los siguientes:

a) El daño físico o mental;
b) La pérdida de oportunidades, en particular las de empleo, educación y prestaciones sociales;
c) Los daños materiales y la pérdida de ingresos, incluido el lucro cesante;
d) Los perjuicios morales;
e) Los gastos de asistencia jurídica o de expertos, medicamentos y servicios médicos y servicios psicológicos y sociales.[77]

2. En el presente punto, debido al fallecimiento de **VD†**, la indemnización se realizaría a favor de las víctimas indirectas, que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 4 fracción I y II, de la Ley de Atención a Víctimas del Estado de Zacatecas, correspondería a la **VI2** y del **VI3**, en su calidad de padres; de los **VI4, VI5 y VI6**, en su calidad de hermanos; así como de la **VI1, M1** y **M2**, en su calidad de concubina e hijo; para que, en su caso, sean beneficiarios del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, para que sea cuantificado lo previsto en los incisos d) y e), relativos a los perjuicios morales, los gastos de asistencia jurídica y servicios psicológicos requeridos para la aceptación de la pérdida.

B) De la rehabilitación.

77 Ídem, párr. 20.

1. La presente reparación debe “incluir la atención médica y psicológica, así como servicios jurídicos y sociales.”[78], en ese contexto, las medidas de rehabilitación buscan reducir los padecimientos físicos y psicológicos de las víctimas, a través del otorgamiento de servicios de atención médica, psicológica, jurídica y social que éstas requieran.

2. Por lo tanto, si bien, el señor **VD†** como víctima por omisión del personal de la Policía de Investigación, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, no puede recibir atención, deberá brindarse la atención psicológica y tanatológica a sus víctimas indirectas, por la afectación emocional que les pudiera haber causado su deceso.

C) De las medidas de satisfacción.

1. La satisfacción cuando sea pertinente y procedente deberá incluir la totalidad o parte de las medidas siguientes:

a) Medidas eficaces para conseguir que no continúen las violaciones;

b) La verificación de los hechos y la revelación pública y completa de la verdad, en la medida en que esa revelación no provoque más daños o amenace la seguridad y los intereses de la víctima, de sus familiares, de los testigos o de personas que han intervenido para ayudar a la víctima o impedir que se produzcan nuevas violaciones;

c) La búsqueda de las personas desaparecidas, de las identidades de los niños secuestrados y de los cadáveres de las personas asesinadas, y la ayuda para recuperarlos, identificarlos y volver a inhumarlos según el deseo explícito o presunto de la víctima o las prácticas culturales de su familia y comunidad;

d) Una declaración oficial o decisión judicial que restablezca la dignidad, la reputación y los derechos de la víctima y de las personas estrechamente vinculadas a ella;

e) Una disculpa pública que incluya el reconocimiento de los hechos y la aceptación de responsabilidades;

f) **La aplicación de sanciones judiciales o administrativas a los responsables de las violaciones**;

g) Conmemoraciones y homenajes a las víctimas;

h) **La inclusión de una exposición precisa de las violaciones ocurridas en la enseñanza de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, así como en el material didáctico a todos los niveles**.[79]

2. En relación a la presente reparación, resultan pertinentes y procedentes, las señaladas en los incisos a), f) y h), esto es, que como medidas eficaces para conseguir que no continúen este tipo de violaciones por omisión, deberá capacitarse al personal de la Policía de Investigación, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, para que se sujete a los protocolos que permitan realizar sus funciones, en la medida de detectar y evitar eventos, como el acontecido con **VD†.**

3. Asimismo, se inicien los procedimientos administrativos en contra del **INSPECTOR JEFE AR1**, así como del Policía Primero **PI1**, elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, por las violaciones al derecho a la integridad y a la vida de las personas privadas de su libertad.

D) De las garantías de no repetición.

1. A fin de prevenir la violación de los derechos mencionados en párrafos precedentes, resulta indispensable que la Fiscalía General de Justicia del Estado, realicen los trámites correspondientes ante las instancias respectivas, a efecto de obtener y contar con los

78 Ídem, párr. 21.

79 Ídem, párr. 22.

recursos mínimos indispensables, suficientes y eficaces, para el debido funcionamiento de las instalaciones de la Corporación, como son: personal técnico, administrativo, jurídico, médico y operativo suficiente para cubrir todos los servicios y horarios; y con ello, cumplir con su obligación de Estado garante de la integridad física y la vida de las personas detenidas que están bajo su custodia.

2. Igualmente, deberán implementarse programas de capacitación dirigidos al personal de la citada Policía de Investigación, en materia de derechos humanos, haciendo especial énfasis en temas relacionados con la protección del derecho a la integridad y seguridad personal y a la vida, en relación con el deber del Estado garante de las personas privadas de su libertad, así como, en la labor de custodia, vigilancia, protección y seguridad de las personas privadas de su libertan en separos de la Policía de Investigación, a fin de incidir en la erradicación de practicas y omisiones que conlleven la vulneración de tales derechos.

XI. RECOMENDACIONES.

Por todo lo anteriormente expuesto, y con fundamento en los 1 y 102 apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 2, 3, 4, 8, 17, 37, 51, 53, 54, 56, 57 y 58 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas se emiten las siguientes Recomendaciones:

PRIMERA. Dentro del plazo máximo de un mes, contado a partir de la notificación de la presente Recomendación, se inscriba en el Registro Estatal de Víctimas a **VD†**, como víctima directa de violaciones a sus derechos humanos, por parte de autoridades de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas; así como a la **VI2** y del **VI3**, en su calidad de padres; de los **VI4, VI5 y VI6**, en su calidad de hermanos; así como de la **VI1, M1** y **M2**, en su calidad de concubina e hijos, por ser víctimas indirectas[80]. Lo anterior, a efecto de que, en un plazo máximo de un año, contado a partir de la notificación de la presente Recomendación, se garantice su acceso oportuno al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, previsto en la Ley de Atención a Víctimas del Estado de Zacatecas, para que se realice la indemnización correspondiente, conforme a los parámetros establecidos en el apartado anterior. Debiendo remitir a este Organismo las constancias con que acrediten su cumplimiento.

SEGUNDA. Dentro del plazo máximo de un mes, contado a partir de la notificación de esta resolución se localice a la **VI2,** al **VI3**, a los **VI4, VI5 y VI6**, así como a la **VI1** y a **M1** y **M2**, a fin de que manifiesten si es su deseo recibir atención psicológica y tanatológica, relacionada con los hechos de la presente queja. De ser el caso, en un plazo de un mes, posterior a ello, se inicie su tratamiento hasta su total restablecimiento, remitiendo a este Organismo, las constancias que acrediten su cumplimiento.

TERCERA. En un plazo máximo de un mes, contado a partir de la aceptación de la presente resolución, se inicie procedimiento administrativo de responsabilidad, en contra del **INSPECTOR JEFE AR1**, así como del **AR2**, Policía Primero de la Policía de Investigación, por ser los elementos que omitieron cumplir con la protección y garantía del derecho a la integridad personal y a la vida del agraviado; debiendo enviarse a este Organismo, las constancias de cumplimiento.

CUARTA. Dentro del plazo máximo de tres meses, contado a partir de la aceptación de la presente resolución, se acredite la capacitación de todo el personal de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas; a fin de que realicen sus labores, bajo los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y pleno respeto a los derechos fundamentales y a la dignidad humana. Haciendo énfasis en temas relacionados con el derecho a la integridad y seguridad personal y a la vida, en relación con el deber del Estado garante de las personas privadas de su libertad, así como, en la labor de custodia, vigilancia, protección y seguridad de las personas privadas de su libertan en separos de la Policía de Investigación, con la finalidad de mejorar las técnicas,

80 Fracciones I y II, del artículo 4 de la Ley de Atención a Víctimas del Estado de Zacatecas.

aptitudes y métodos de trabajo policial, para la aplicación de la ley en forma correcta y eficaz; remitiendo a este Organismo, las constancias de cumplimiento respectivas.

QUINTA. Dentro del plazo máximo de tres meses, contados a partir de la aceptación de la presente Recomendación, las cámaras de vigilancia ubicadas en los separos de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado, en el Municipio de Fresnillo, funcionen de manera adecuada y permanezcan vigiladas por una persona designada específicamente para realizar dicha función, mientras se encuentren personas detenidas. Asimismo, se deberá garantizar que las grabaciones de dichas cámaras guarden las filmaciones por el lapso de dos años[81], debiendo para ello, designar personal capacitado para la correcta operación y monitoreo de dicho sistema. Debiendo remitir a este Organismo, las constancias de cumplimiento respectivas.

SEXTA. Dentro del plazo máximo de 3 meses, contados a partir de la aceptación de la presente Recomendación, se realicen las gestiones necesarias ante el área administrativa correspondiente, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, a fin de se modifique la infraestructura de los separos de la Policía de Investigación, en Fresnillo, Zacatecas, específicamente en lo que a la construcción de camas se refiere, sustituyendo las de tubular por planchas de concreto, con su respectivo colchón o cualquier otro material que impida que existan puntos de ligamiento, en los cuales se puedan colocar objetos que, como en el caso ocurrió, provoquen la pérdida de vidas humanas. Debiendo enviar a este Organismo, las constancias de cumplimiento.

SÉPTIMA. Dentro del plazo máximo de 3 meses, contados a partir de la aceptación de la presente Recomendación, se realicen las gestiones necesarias ante el área administrativa correspondiente, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, a efecto de que se designe una partida presupuestal para suministrar alimentación adecuada, durante toda su estancia, a las personas que, en su caso, sean ingresados a los separos de la Policía de Investigación, en Fresnillo, Zacatecas, debiendo enviar a este Organismo, las constancias de cumplimiento.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 53, párrafo segundo de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, se hace del conocimiento de la autoridad a la que va dirigida esta Recomendación, que dispone de un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente en que ésta se le notifique, para que manifieste si la acepta o no, en el entendido de que, de no aceptarla, su respuesta se hará del conocimiento de la opinión pública. En caso de que la acepte, se le notifica que dispone de un plazo de 15 días, contados a partir del vencimiento del término del que disponía para responder sobre la aceptación, a fin de enviar las pruebas de su cumplimiento.

Así lo determina y firma

DRA. EN D. MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOS
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE ZACATECAS

81 Lo anterior, acorde a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, que dispone: art. 159. Todo establecimiento, instalación o cualquier sitio en control de las autoridades federales, estatales o municipales en donde pudieran encontrarse personas en privación de la libertad, deberá contar con cámaras de video que permitan registrar los accesos y salidas del lugar. Las grabaciones deberán almacenarse de forma segura por dos años.

Expediente: CDHEZ/109/2020

Tipo de queja: Oficiosa.

Persona agraviada: VD†, persona privada de su libertad en el Centro Regional de Reinserción Social, de Fresnillo, Zacatecas.

Autoridades responsables:
I. Personal de seguridad y custodia del Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo, Zacatecas.

Derechos humanos vulnerados:
I. Derecho a la integridad personal y a la vida, en relación con el deber del Estado garante de las personas privadas de su libertad.

Zacatecas, Zac., a 21 de diciembre de 2021; una vez concluida la investigación de los hechos que motivaron el expediente **CDHEZ/109/2020**, y analizado el proyecto presentado por la Visitaduría Regional de Fresnillo, la suscrita aprobó, de conformidad con los artículos 4, 8 fracción VIII, 17 fracción V, 37, 51, 53 y 56 de la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, en relación con lo dispuesto por los numerales 27, fracción VIII, 40, 161, fracción X, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173 y 174 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, la **Recomendación 59/2021**, que se dirige a la autoridad siguiente:

GRAL. DE B.E.M. RET. ADOLFO MARÍN MARÍN, Secretario de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas.

R E S U L T A N D O;

I. DE LA CONFIDENCIALIDAD.

1. De conformidad con los artículos 6º, apartado A, fracción II y 16, párrafo segundo, ambos de la Constitución Política de los Estados Mexicanos y los artículos 23 y 85 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, los datos personales, así como aquellos relativos a la vida privada y familiar, permanecerán confidenciales, ya que no tienen el carácter de públicos.

2. Asimismo, en términos de lo dispuesto por el artículo 4º, párrafo sexto, 6º, fracción II, y 16 de la Convención Sobre los Derechos del Niño, los nombres, apellidos y demás datos personales de niñas y niños vinculados con los hechos de la presente resolución, se mantienen bajo la misma estricta confidencialidad, en pleno respeto a su derecho a la intimidad y vida privada.

II. RELATORÍA DE LOS HECHOS Y OBJETO DE LA CONTROVERSIA.

1. En fecha 01 de marzo de 2020, diversos medios de circulación estatal, publicaron notas periodísticas en las que, esencialmente, se informó sobre el deceso de **VD†**, quien se encontraba privado de su libertad en el Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo, Zacatecas.

En fecha 02 de marzo de 2020, el Departamento de Orientación y Quejas de este Organismo, en correspondencia con lo dispuesto por el artículo 30, párrafo tercero, de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, en relación con el numeral 63, fracción V, del Reglamento que rige su actuar, inició, de manera oficiosa, queja por el deceso de **VD†**, al interior del Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo, Zacatecas, acontecido el 29 de febrero de 2020.

Por razón de turno, en esa misma fecha, se remitió el acuerdo de admisión de queja oficiosa, a la Visitaduría Regional de Fresnillo, de este Organismo, bajo el número de expediente citado al rubro, a efecto de formular el acuerdo de calificación de ésta, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 123 y 124 del Reglamento de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas.

El 04 de marzo de 2020, la queja se calificó como presuntos hechos violatorios de derechos humanos.

2. Los hechos materia de la queja consistieron en lo siguiente:
En fecha 01 de marzo de 2020, el diario de circulación estatal: "El Sol de Zacatecas", publicó nota periodística bajo el título: *"Sujeto se suicida en su celda";* mientras que, el rotativo "Imagen", informó con el título: *"Encuentran a un joven ahorcado en el Cereso"*; finalmente, el periódico "NTR Zacatecas", publicó nota con el título: *"MUERTO EN CERESO".*

En dichas notas, los medios periodísticos informaron de manera general que, **VD†**, fue encontrado sin vida, en el interior del Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo, Zacatecas, donde se encontraba privado de su libertad.

3. Las autoridades involucradas, rindieron informe respectivo:

a) En fecha 20 de marzo de 2020, el **DCPF1**, otrora Director del Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo, Zacatecas, remitió informe de autoridad correspondiente.

III. COMPETENCIA.

1. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas es competente, en términos de los artículos 1º, 4º, 6º, 8º fracción VII, inciso A) y 31 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, en relación con los numerales 15, 22 y 23 de su Reglamento Interno, debido a que la queja se promueve en contra de servidores públicos de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, dependientes de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas, por hechos ocurridos en el año 2020.

2. De conformidad con el artículo 124, fracción I del Reglamento Interior de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, este Organismo advierte que, de los hechos materia de la queja, se puede presumir la violación de los derechos humanos de la parte agraviada, así como la responsabilidad por parte de los servidores públicos señalados.

3. Esta Comisión, presumió la violación de los siguientes derechos:

a) Derecho a la integridad personal y a la vida, en relación con el deber del Estado garante de las personas privadas de su libertad.

IV. PROCEDIMIENTO ANTE LA COMISIÓN.

Con la finalidad de documentar las presuntas violaciones a derechos humanos, así como para determinar la existencia o no de responsabilidad por parte de las y los servidores públicos señalados, durante el procedimiento de investigación de esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, se entrevistó a las personas relacionadas con los hechos; se solicitaron informes de autoridad y en vía de colaboración; se analizaron informes, diversos documentos y las carpetas de investigación relacionadas con los hechos materia de esta Recomendación.

V. PRUEBAS.

Con base en lo estipulado en los artículos 48 y 49 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, en relación con los numerales 149, 150, 151, 152, 153, 154 y 155 del Reglamento Interior de este Organismo, durante el procedimiento realizado por esta Institución se recabaron los elementos probatorios documentales, remitidos tanto por la parte

agraviada como por las autoridades señaladas como responsables, así como documentación, dictámenes e inspecciones necesarios para emitir la resolución correspondiente.

VI. SOBRE LOS DERECHOS VULNERADOS.

Violación al derecho a la integridad personal y a la vida, en relación con el deber del Estado garante.

A. De la posición del Estado, como garante de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.

1. Los derechos humanos constituyen un límite a la acción del Estado en relación con los individuos, generándole a éstos un ámbito de libertad, sin injerencias de la autoridad, por supuesto de acuerdo con su condición propia de ser humano. Ante todo, los derechos humanos cumplen una finalidad que es sancionar las arbitrariedades de las autoridades hacia los gobernados; esto es, que cuando una autoridad abusa de su poder en perjudico de un individuo, es donde se observa una clara vulneración a los derechos humanos, así mismo, tienen como finalidad salvaguardad la integridad humana de la persona y que ésta no se vea menoscabada[1]. Motivo por el cual, es posible afirmar que, las personas que se encuentran privadas de su libertad conservan todos sus derechos humanos; desde luego, con excepción de aquellos que hayan sido restringidos temporalmente, por una disposición legal, o como consecuencia de su estado de reclusión.

2. Lo anterior, atendiendo a que el Estado, tiene una posición especial de garante respecto de las condiciones de reclusión de dichas personas y, por consiguiente, tiene la obligación de vigilar porque tales condiciones, sean compatibles con su dignidad humana. En ese sentido, es posible afirmar que, tal obligación, no se materializa con la mera provisión de servicios básicos, sino que debe hacerse patente mediante el establecimiento de recursos y la implementación de medidas que aseguren la tutela efectiva de los derechos humanos de las y los internos.

3. En lo que a este tema concierne, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha sintetizado la importancia de dicha obligación, bajo la siguiente premisa:

> *"La proclamación de derechos sin la provisión de garantías para hacerlos valer queda en el vacío. Se convierte en una formulación estéril, que siembra expectativas y produce frustraciones. Por ello es preciso establecer las garantías que permitan reclamar el reconocimiento de los derechos, recuperarlos cuando han sido desconocidos, restablecerlos si fueron vulnerados y ponerlos en práctica cuando su ejercicio tropieza con obstáculos indebidos". [2]*

4. Asimismo, el Tribunal Interamericano ha reiterado en diversas ocasiones que, la mayoría de las muertes de personas privadas de su libertad que suceden al interior de los centros penitenciarios de la región, guardan estrecha relación con las condiciones de violencia interna, resultante de la falta de prevención y atención oportuna de las autoridades penitenciarias. Mientras que, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias, ha señalado que, las autoridades mexicanas, no han abordado de manera adecuada el problema de autogobierno en los centros de reclusión, e incluso, se mantienen al margen del asunto, ya sea por temor o por complicidad[3].

5. Dicha problemática, en el caso específico de esta Entidad Federativa, se ha evidenciado por este Organismo de manera reiterada en los últimos años; por lo cual se han emitido diversas Recomendaciones en las que se ha visibilizado el incumplimiento del Estado, en cuanto a su deber reforzado en la garantía de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad. A guisa de ejemplo, pueden citarse las siguientes: **06/2017, 02/2018, 03/2018, 06/2018, 16/2018, 18/2018, 21/2018, 05/2019, 08/2019,12/2019** y **15/2019**; **02/2020**, **03/2020, 04/2020, 06/20 07/2020**, **11/2020**, mientras que, en el año que transcurre, concretamente por hechos ocurridos en el Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo, Zacatecas, se ha emitido las Recomendaciones **28/2021 y 35/2021**. Siendo importante además resaltar que, en

---

[1] CARBONELL, M., *Derechos fundamentales en México*, 2004.

[2] CIDH, *El acceso a la justicia como garantía de los derechos económicos, sociales y culturales. Estudio de los estándares fijados por el sistema interamericano de derechos humanos*, OE A/Ser.L/V/II .129 Doc. 4, cidh/oea, 7 de septiembre de 2007, párr. 183, disponible en: http://cidh.org/pdf%20files/acceso%20a%20la%justicia%desc.pdf

[3] Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, *Propuesta General 1/2018, La ejecución penal desde los derechos humanos,* pág. 42.

los casos que originaron las Recomendaciones marcadas con los números **02/2020** y **04/2020**, al igual que en el que ahora nos ocupa, los hechos ocurrieron en el área de separos, área específica donde una vez más, este Organismo al igual que en dichas resoluciones, pudo constatar que existe sobrepoblación y hacinamiento; así como que, a pesar de contar con cámaras de vigilancia, no había personal asignado para su monitoreo y, de nueva cuenta, el personal de seguridad y custodia encargado del cuidado de los internos en dicho espacio, era insuficiente. Por consiguiente, es posible afirmar una vez más, que persiste la omisión por parte de la Dirección de Prevención y Reinserción Social del Estado de Zacatecas, en la salvaguarda y garantía del derecho a la integridad personal y a la vida, de las personas privadas de su libertad.

6. Luego entonces, recordando que el derecho a la vida es aquel *"respecto del cual no se autoriza suspensión alguna, ni siquiera en situaciones excepcionales"*[4]; mientras que, el derecho a la integridad personal *"es aquél que tiene todo sujeto para no sufrir tratos que afecten su estructura corporal, sea física, fisiológica o psicológica, o cualquier otra alteración en el organismo que deje huella temporal o permanente, que cause dolor o sufrimiento grave con motivo de la injerencia o actividad dolosa o culposa de un tercero"*[5], puede concluirse que, desde la perspectiva de los derechos humanos, las personas internas deben recibir el mismo respeto a su dignidad humana que aquél que deben recibir las personas en libertad.

7. Motivo por el cual, esta Comisión insiste, tal como lo ha hecho en las Recomendaciones enlistadas en párrafos antecedentes, y en concordancia con la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que **la reclusión no tiene que imponer mayores restricciones al disfrute de los derechos humanos que las que devienen de la propia privación de la libertad.** De modo tal que, la vida e integridad moral, física, sexual y psicológica de todas las personas internas, deberá ser salvaguardada por la autoridad penitenciaria de forma reforzada, garantizando, manteniendo y, en su caso, restableciendo el orden y la paz dentro de los establecimientos carcelarios, utilizando para ello los protocolos aplicables, y con apoyo de las herramientas, los mecanismos y el equipo necesarios disponibles para el cumplimiento de sus atribuciones.

8. Bajo ese contexto, atendiendo a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con relación a que para establecer que se ha producido una violación al derecho a la vida no se requiere determinar la culpabilidad de sus autores o su intencionalidad, y tampoco es preciso identificar individualmente a los agentes a quienes se atribuyen los hechos violatorios, ya que resulta suficiente demostrar que se han verificado acciones u omisiones, que hayan permitido la perpetración de esas violaciones, o que exista una obligación del Estado que haya sido incumplida; esta Comisión conoció de los hechos en que perdió la vida **VD†**, mientras se encontraba bajo la custodia del Estado en las instalaciones del Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo, Zacatecas.

9. Lo anterior, implica que la intervención de esta Institución, es posible en virtud a la atribución de investigar las posibles violaciones a derechos humanos, atribuidas a autoridades estatales y municipales, ya sea que tales violaciones sean por acción o por omisión. Ello, con independencia de que existen evidencias que hacen posible presumir que, la causa de muerte de **VD†**, lo fue asfixia por ahorcamiento con lazo, según se desprende de la necropsia practicada a su cadáver y que obra en autos de la carpeta de investigación [...], originada con motivo de los hechos que aquí se dilucidan, y que fueron proporcionados por el Agente del Ministerio Público, adscrita a la Unidad Especializada en Investigación Mixta número VI del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas.

10. Razón por la cual, en un primer momento, se establece la obligación del Estado, como garante de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad y, en segundo término, se realiza el estudio detallado del derecho a la vida y del derecho a la integridad personal, transgredidos en perjuicio de **VD†**. En otros términos, toda vez que la muerte de **VD†**, puede representar por omisión, una vulneración a su derecho a la vida y a su integridad personal, su deceso se estima atribuible, indirectamente, al personal de seguridad y custodia

---

[4] Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Observación General núm. 6. Derecho a la vida, HRI/GEN/1/ Rev.9, aprobada en el 16º periodo de sesiones, 30 de abril de 1982, párr. 1.
[5] Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Recomendación 69/2016, de fecha 28 de diciembre de 2016.

del Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo, Zacatecas, en virtud a que, en su calidad de servidores públicos representantes del Estado, su obligación consiste en garantizar los derechos humanos de todas las personas internas bajo su custodia, incluido desde luego, el derecho a la vida, con base a los argumentos hasta aquí expuestos.

11. Así, debemos partir de qué significa el término "garante". Para ello, es dable decir que, la raíz etimológica de dicho término proviene del vocablo francés *"garant"* que, a su vez, viene de la palabra germánica *"Warren"*, que significa: *"hacerse responsable, asegurar"*. En términos legales, la figura del garante se configura por aquel que se compromete a responder por otra persona[6]. Persona con la obligación jurídica de garantizar un derecho a un titular[7]. Entonces pues, frente a las personas privadas de libertad, el Estado se encuentra en una posición especial, reforzada, de garante, toda vez que las autoridades […] ejercen un fuerte control o dominio, frente a las personas que se encuentran bajo su custodia[8].

12. Por lo tanto, si retomamos el hecho de que el Estado, como responsable de los centros penitenciarios, es el garante de los derechos de las personas bajo su custodia[9], se colige que debe prevenir todas aquellas situaciones que por acción directa u omisión pudieran conducir a la supresión del derecho a la vida. Por ello, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha conminado a los Estados a proteger el derecho a la vida e integridad de las personas privadas de su libertad, tomando en consideración el constante riesgo de que puedan sufrir violaciones a sus derechos humanos, debido a la violencia carcelaria[10], misma que, conforme a los criterios del propio Tribunal Interamericano, es producida, entre otros factores, por la corrupción, el autogobierno, las disputas entre personas que viven en reclusión o bandas criminales, el consumo problemático de drogas y el hacinamiento[11].

13. Dichas circunstancias, precisan que el Estado, asegure que sus agentes ejerzan un control adecuado de la seguridad y el orden en los centros penitenciarios. Sobre dicho tópico, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes, ha sostenido que el personal penitenciario, debe ver su trabajo como una vocación más que como una mera actividad de subsistencia; pues si eso sucede, se generarán condiciones diferentes de interacción y disminuirán los incidentes de violencia. Inclusive, ha señalado que el profesionalismo del personal requiere que sean capaces de tratar con las personas privadas de la libertad de forma decente y humana, mientras pone atención a los asuntos de seguridad y orden[12].

14. En esa lógica, en materia de muertes de personas internas, el Estado se encuentra obligado a prevenirlas y a responder por ellas[13]. Con relación a ello, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias ha sostenido que, aunque la muerte no sea producida directamente por la acción del Estado, como en el caso sucedió, en principio de cuentas se presume su responsabilidad[14], bajo la premisa que se le exige un nivel más elevado y reforzado de protección, debido a que estas personas se encuentran limitadas de la libertad y consecuentemente, en su capacidad de autoprotección, dependiendo para ello completamente de la autoridad penitenciaria[15].

---

[6] Obtenido de: http://conceptodefinicion./d/
[7] Obtenido de: http://popjuris.com/dicionario/definicion-de/garante/
[8] Corte IDH, Caso *Instituto de Reeducación del Menor* Vs. Paraguay. Sentencia de 2 de septiembre de 2004 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), párr.152.
[9] Corte IDH, *Personas privadas de libertad*, San José, Corte idh/danida (Cuadernillo de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, núm. 9), s. a., pág. 5.
[10] Corte IDH, *Informe sobre los derechos humanos de las personas privadas de libertad en las Américas*, *doc. cit.*, párr. 270.
[11] Corte IDH, *Asunto de las Penitenciarías de Mendoza respecto Argentina*, medidas provisionales, resolución del 18 de junio de 2005, p. 18, resolutivo 1.
[12] Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes, *11 Informe general de actividades*, Consejo de Europa, CPT/Inf (2001) 16, párr. 26.
[13] Asamblea General de las Naciones Unidas, *Ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias. Nota del Secretario General*, A/61/311, 5 de septiembre de 2006, párr. 50.
[14] Ídem, párr. 53.
[15] Corte IDH, *Informe sobre los derechos humanos de las personas privadas de libertad en las Américas*, *doc. cit.*, párr. 53.

15. Consecuentemente, una vez que el deceso de una persona privada de la libertad ha ocurrido, el Estado debe actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar los actos que se sospeche que fueron cometidos por personas o entidades privadas.[16] Pues en caso contrario, podría incurrir en responsabilidad; lo cual, es imperativo en los casos de suicidios y homicidios ocurridos dentro de las cárceles y centros penitenciarios bajo su jurisdicción. Motivo por el cual, se reitera, la obligación de este Organismo, en la especie, consiste en investigar la responsabilidad de las autoridades involucradas, en la vulneración del derecho a la vida e integridad personal de **VD†**, interno que, a pocos días de haber ingresado al Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo, Zacatecas, falleció en fecha 29 de febrero de 2020.

B. Del derecho a la vida.

16. Este Organismo Constitucional Autónomo, ha reiterado que, el derecho a la vida ocupa un lugar especial en la lista de los derechos fundamentales de la persona[17]. Tanto así que, pese a que la Doctrina afirma que todos los derechos humanos tienen igual valor[18], a la hora de examinar casos concretos de violaciones de este derecho, los Organismos Internacionales y Regionales competentes, no ponen en tela de juicio, la necesidad de destacar el carácter especial del derecho a la vida. El derecho a la vida pues, se estima como prerrequisito para el disfrute de todos los demás derechos humanos.[19] Lo anterior, implica entonces que se trata de un derecho fundamental, esencial, sin el cual resulta imposible el disfrute de otros derechos o libertades, pues éstos, carecerían de sentido ante la desaparición de la persona titular del derecho; por ello, el derecho a la vida, como inseparable de toda persona, involucra que nadie puede ser privado de la vida de forma arbitraria. Dicho derecho, se encuentra reconocido en diversos instrumentos internacionales y regionales, firmados y ratificados por el Estado Mexicano[20].

17. De este modo, mediante su Observación General sobre el artículo 6, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Comité de Derechos Humanos, calificó al derecho a la vida como: *"el derecho supremo respecto del cual no se autoriza suspensión alguna, ni siquiera en situaciones que pongan en peligro la vida de la nación".*[21] Aunado a ello, en un caso relativo a la pena de muerte, analizado en 1993, el propio Comité, sostuvo lo siguiente:

> *"El punto de partida de un examen de esta cuestión debe ser la obligación el Estado parte (…) de garantizar los derechos reconocidos en el Pacto a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción. El derecho a la vida es el más esencial de estos derechos".*[22]

18. A partir de entonces, el Comité ha reiterado en sus resoluciones, de manera textual, que: *"El derecho a la vida es el más esencial de estos derechos"*[23]. Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, utilizando un lenguaje más sutil y cuidadoso en los casos en que ha abordado dicho tópico, sostuvo, en la Opinión Consultiva 16/99, que:

> "*Si el debido proceso legal, con su conjunto de derechos y garantías, debe ser respetado en cualesquiera circunstancias, su observancia es aún más importante*

---

[16] Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Observación General núm. 31. Naturaleza de la obligación jurídica general impuesta a los Estados Partes en el Pacto, CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, aprobada en el 80º periodo de sesiones, 29 de marzo de 2004, párr. 8.

[17] Ver, por ejemplo, las Recomendaciones recaídas a los expedientes CDHEZ/325/2018, CDHEZ/454/2018 y CDHEZ/509/2018.

[18] Ver, por ejemplo, el siguiente pasaje de la Declaración de Viena, adoptado por la segunda Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos, celebrada en Viena en 1993: *"Todos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes y están relacionados entre sí. La comunidad debe tratar los derechos humanos en forma global de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y dándoles a todos la misma importancia."* (párr. 5).

[19] Corte IDH, *Caso Espinoza González* vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2014. Serie C. No. 289, párr. 205.

[20] Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, art. 133. "Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de las entidades federativas.

[21] Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Observación General No. 6, párr. 1 (1982).

[22] Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, *Caso Kindler* vs. Canadá, párr. 13.1 (énfasis agregado).

[23] Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, *Caso A.R.J.* vs. Australia, párr. 6.8 (1997); G.T. c. Australia, párr. 8.1 (1998).

> *cuando se halle en juego el supremo bien que reconocen y protegen todas las declaraciones y tratados de derechos humanos: la vida humana".*[24]

19. Mientras tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, también ha reconocido de manera enfática el carácter especial del derecho a la vida. En una decisión, adoptada en 1996, sostuvo lo siguiente:

> *"(…) la Comisión Interamericana de Derechos Humanos debe destacar (…) que el derecho a la vida entendido como un derecho fundamental de la persona humana consagrado en la Declaración Americana y en diversos instrumentos internacionales a escala regional y universal, tiene el estatus de jus-cogens."*[25]

20. Igualmente, la Comisión explicó que, el concepto de *juscogens*, "*se deriva de un orden superior de normas establecidas en tiempos antiguos y que no pueden ser contravenidas por las leyes del hombre o de las naciones."* [26] En adición a lo anterior, este Organismo destaca el hecho de que, en una decisión más reciente, la Comisión Interamericana precisó que: "*El derecho a la vida es ampliamente reconocido como el derecho supremo del ser humano y conditio sine qua non para el goce de todos los demás derechos."*[27]

21. En el ámbito universal, dicho derecho se salvaguarda por el artículo 3°, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y por el numeral 6.1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; instrumentos que establecen de forma genérica que toda persona tiene derecho a la vida, sin condicionar este derecho a si la persona se encuentra o no privada de su libertad. Adicionalmente, el Comité de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, resolvió, a través de la Observación General número 6, que el derecho a la vida es un derecho supremo respecto del cual, no se autoriza suspensión alguna. Dado su carácter inviolable, el derecho a la vida forma parte del *iuscogens*[28] y conforma un núcleo inderogable, al encontrarse consagrado como uno de los derechos que no admiten suspensión en casos de guerra, peligro público u otras amenazas a la independencia o seguridad de los Estados[29].

22. Por otra parte, en contexto regional, el derecho a la vida se encuentra previsto en el artículo 1°, de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, así como en el artículo 4°, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en términos similares a los señalados en el párrafo anterior. Adicionalmente, los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, establecen que, el respeto al derecho a la protección de la vida, no puede ser objeto de suspensión alguna. Mientras tanto, en el marco jurídico interno, el derecho a la vida se encuentra consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyas normas se encaminan a reconocer la conservación y la protección de la vida humana. Lo cual, ha sido sustentado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tras el análisis integral y extensivo de lo estipulado por los artículos 1°, 14 y 22 constitucionales, de los cuales, sostuvo nuestro Máximo Tribunal, se desprende la protección de este derecho[30].

23. En tal sentido, se puede concluir que, las obligaciones del Estado respecto de la garantía del respeto a la vida, pueden resumirse de la manera siguiente:

> a) Negativas: implican una abstención, un "no hacer" o una no intervención y,
> b) Positivas: requieren de un "hacer" por parte del Estado; esto es, de la adopción e implementación de medidas, a través de sus diversas instituciones y agentes, para su

---

[24] Corte IDH, Opinión Consultiva OC-16/99, párr. 135.
[25] Oficina en México, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Escuela de Graduados en Administración Pública y Política Pública, México, D.F., septiembre de 2007, pág. 100.
[26] Corte IDH, *Caso Remolcadora* 13 de marzo, párr. 79 (1996). Ver también Sequieras Mangas c. Nicaragua, párr. 145. (1997). La CIDH hace una exégesis de la relación y las diferencias entre los conceptos de derecho consuetudinario y de *jus cogens* en los párrafos 43 a 50 de su decisión en el C*aso Domínguez* vs. Estados Unidos (2002).
[27] Corte IDH, *Caso Edwards* y otros vs. Bahamas, párr. 109 (2001).
[28] Corte IDH. Informe No. 47/96, Caso 11.436: Caso *Víctimas del Barco Remolcador "13 de marzo"* vs Cuba, 16 de octubre de 1996, párr.79.
[29] Corte IDH. *Caso Galdeón García* vs Perú. Sentencia de 6 de abril de 2006. Serie C. No.147, párr. 32.
[30] Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tesis jurisprudencial 13/2002: DERECHO A LA VIDA, SU PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Febrero de 2002, pág. 589.

> debido cumplimiento; es decir, para proteger y preservar la vida, garantizando el pleno y libre ejercicio de los derechos de todas las personas bajo su jurisdicción.[31]

24. En lo concerniente al derecho a la vida, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al pronunciarse sobre su garantía, ha sostenido que:

> *"…no solo presupone que ninguna persona sea privada de su vida arbitrariamente (obligación negativa), sino que además requiere, a la luz de su obligación de garantizar el pleno y libre ejercicio de los derechos humanos, que los Estados adopten todas las medidas apropiadas para proteger y preservar el derecho a la vida (obligación positiva), de quienes se encuentren bajo su jurisdicción. Esta protección activa del derecho a la vida por parte del Estado no solo involucra a sus legisladores, sino a toda institución estatal y a quienes deben resguardar la seguridad, sean éstas, fuerzas de policía o sus fuerzas armadas"[32].*

25. Bajo el contexto anterior, este Organismo considera que, cuando existe una omisión de salvaguardar la vida de personas detenidas bajo la custodia del Estado, por falta de vigilancia de las autoridades penitenciarias, se actualiza el incumplimiento de su deber reforzado de cuidado, en su calidad de garante. Es decir, en lo que concierne al derecho a la vida de las personas privadas de su libertad, el Estado se encuentra en una posición especial de garante, motivo por el cual, su obligación de salvaguardar este derecho es aún mayor, por lo que debe asegurarse de proporcionar condiciones mínimas que sean compatibles con el respeto a la dignidad humana. Consecuentemente, el Estado tiene el deber de prevenir todas aquellas situaciones que pudieran conducir, por acción o por omisión, a la supresión de dicho derecho. [33]

26. Ahora bien, en lo que atañe al deber del Estado, como garante de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad, este Organismo considera oportuno puntualizar que, la jurisprudencia universal e interamericana, también reconoce la **responsabilidad del Estado por omisión** debido a la desprotección de los presos y la inatención a sus necesidades básicas. Una de las primeras decisiones al respecto, ampliamente citada en la jurisprudencia posterior, es la emitida por el Comité de Derechos Humanos en el *Caso Dermit vs. Uruguay*; en el cual, luego de 8 años de prisión, y cuando estaba a punto de obtener su libertad para establecer su residencia en un país de asilo, la víctima murió repentinamente en su celda. **El Estado alegó suicidio** y proporcionó al Comité una copia de la autopsia, **pero no explicó las circunstancias de la muerte,** las cuales, por lo visto, no fueron objeto de una investigación. El denunciante, un pariente de la víctima, presentó evidencias de que la hipótesis de suicidio era inverosímil. El Comité consideró al Estado responsable por la muerte, independientemente de que hubiera sido homicidio o suicidio, justificando su decisión de la siguiente manera:

> *"(…) si bien el Comité no puede llegar a una conclusión definitiva sobre si Hugo Dermis cometió suicidio, fue impulsado a cometerlo o fue muerto de otro modo mientras estaba encarcelado,* ***la conclusión ineludible es que, en cualquier circunstancia, las autoridades uruguayas fueron responsables, por acción u omisión, de no haber adoptado medidas adecuadas para proteger su vida*** *conforme exige el párrafo 1 del artículo 6 del Pacto".[34]*

Las negritas, son de esta Comisión.

27. Entonces pues, es posible advertir que, el Estado, estará obligado a rendir cuentas del tratamiento dado a la persona que falleció bajo su custodia[35]. Ya que, cuando una persona es detenida en un estado óptimo de salud, o en condiciones que no impliquen un riesgo inminente a su vida y, con posterioridad muere por causas distintas, incluyendo el suicidio o el descuido de la persona a la que se encomendó su vigilancia, recae en el Estado, el deber de brindar una respuesta satisfactoria y convincente de lo acontecido y, en su caso, desvirtuar las alegaciones

---

[31] Corte IDH. Caso Myma Mack Chang vs. Guatemala. Fondo. Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2003, párr.153.
[32] Corte IDH. *Caso Vargas Areco* vs. Paraguay. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C. No. 155 párr. 75..
[33] Corte IDH. Informe sobre los derechos humanos de las personas privadas de libertad en las Américas. OEA, aprobado por la Corte IDH, el 31 de diciembre de 2011, párr. 270.
[34] Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, *Caso Dermit* vs. Uruguay, párr. 9.2.
[35] Corte IDH. Informe sobre los derechos humanos de las personas privadas de libertad en las Américas. OEA, aprobado por la CIDH, el 31 de diciembre de 2011, párr. 270: Corte IDH. Caso Cárcel de Urso Branco respecto Brasil. Medidas Provisionales. Resolución del 18 de junio de 2002, Considerando 8; European Court of Human Rigths. Case of Salman v Turkey. Application 21986//93. Judgment of june 27, 2000. Grand Chamber.

sobre su responsabilidad, mediante medios de convicción válidos; tomando en cuenta que existe una presunción de responsabilidad estatal sobre lo que ocurra a una persona bajo custodia del Estado.

28. Se deduce entonces que, según lo disponen los ordenamientos jurídicos precitados, el Estado, en su posición de garante de los derechos fundamentales de sus gobernados, está obligado a adoptar las medidas necesarias para proteger y garantizar el derecho a la vida de las personas que se encuentran recluidas en algún centro de detención. Pues no debe soslayarse el hecho de que, la muerte de personas privadas de libertad en centros de reclusión o espacios de detención temporal es consecuencia de la falta de prevención y adopción de las medidas adecuadas para mitigar una situación de riesgo o amenaza. Motivo por el cual, deberán implementarse las acciones preventivas necesarias para evitar que, por acción u omisión, se suprima este derecho. Respecto a dichas medidas, el Tribunal Interamericano ha determinado que, para proteger y garantizar el derecho a la vida de las personas privadas de la libertad, éstas abarcan desde aquéllas que favorecen la conservación de un clima de respeto a los derechos humanos, hasta aquellas dirigidas a proteger a los internos de la violencia que pueda suscitarse entre ellos. Pues dichos actos de violencia representan una situación de riesgo inminente tanto para la vida de las personas recluidas, como para la de cualquier persona que se encuentre en dichos establecimientos. Por lo tanto, el Estado debe tener la capacidad de mantener el orden y la seguridad al interior de los centros penitenciarios y así, garantizar la seguridad de las y los internos en todo momento, así como de las personas que los visitan y de las propias que laboran en ellos.

29. En coincidencia con lo anterior, en el contexto interno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ha pronunciado sobre el deber del Estado como garante de los derechos de las personas privadas de su libertad, y ha sostenido que*: "además de la prohibición a la privación de la vida, el Estado tiene la obligación en el ámbito legislativo, judicial y administrativo de adoptar medidas positivas para preservar la existencia, por lo que se considera transgresión al derecho a la vida no sólo cuando una persona es privada de ésta, sino también cuando se omite adoptar las medidas aludidas para preservarla o para minimizar el riesgo de que la pierda a manos del Estado o de otros particulares*.[36]

30. Bajo ese entendido, se advierte que las autoridades estatales, están obligadas a realizar todas aquellas acciones necesarias para garantizar y preservar la vida de las personas bajo su control, cuidado y custodia. Por tanto, el Estado se encuentra compelido a prevenir de manera razonable aquellas situaciones de riesgo que pudieran conducir, aún por omisión, a la supresión de la inviolabilidad del derecho a la vida; ya sea por otros particulares o por servidores públicos.

C. Del derecho a la integridad personal.

31. Este Organismo Estatal reitera, al igual que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que, el derecho a la integridad personal, es aquél que tiene todo sujeto para no sufrir tratos que afecten su estructura corporal, sea física, fisiológica o psicológica, o cualquier otra alteración en el organismo que deje huella temporal o permanente, que cause dolor o sufrimiento grave con motivo de la injerencia o actividad dolosa o culposa de un tercero; criterio que se desprende de la Recomendación **69/2016**, de fecha 28 de diciembre de 2016.

32. Al respecto, conviene subrayar que, a pesar de que ni la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ni la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, o el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconocen expresamente el derecho a la integridad personal como tal; es evidente que la integridad personal es el bien jurídico cuya protección constituye el fin y objetivo principal de la prohibición de tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanas o degradantes, previstas en el artículo 5, de la Declaración Universal y 7 del Pacto. Por lo tanto, si relacionamos las disposiciones anteriores, con el contenido del artículo 3°, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que establece que, todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona; se puede inferir que, de

[36] Tesis aislada P. LXI/2010, Derecho a la vida. Supuestos en que se actualizará su transgresión por parte del Estado. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época, t. XXXIII, enero 2011, pág. 24.

dicho precepto, se desprende que la obligación de velar por el respeto y garantía de los derechos humanos corresponde al Estado, como ente garante de éstos.

33. Por otra parte, la Declaración Americana de Derechos Humanos, no sólo carece de una disposición que reconozca el derecho a la integridad personal, sino que también adolece de una prohibición expresa de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. No obstante, como ya se indicó en líneas precedentes, su primer artículo consagra el derecho de toda persona a la vida, la libertad y a la seguridad de su persona. Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que el concepto de seguridad personal comprende la integridad personal, a guisa de ejemplo, conviene citar el siguiente razonamiento:

> *"(…) que la tortura física o moral no se justifica en modo alguno, por ser atentatoria contra la dignidad humana y viola la integridad de la persona, cuya defensa está consagrada en el artículo 1 de la Declaración Americana".*[37]

34. De su lado, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sí consagra expresamente el derecho a la integridad personal y hace un aporte valioso a la definición de su contenido, al precisar que comprende la integridad física, psíquica y moral, mediante el texto del artículo 5.1. Aunado a ello, el derecho a la integridad, la prohibición de tortura y los derechos de los reclusos a un trato digno y humano están plasmados en distintos párrafos del artículo 5 de la mencionada Convención. Y, como resultado de lo anterior, mediante el precepto 1.1 dicho instrumento compromete a los Estados a asumir el compromiso de respetar los derechos y libertades reconocidos en ella, así como de garantizar su libre y pleno ejercicio, a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna.

35. Dichas obligaciones generales de respeto y garantía de los derechos humanos, vinculantes para el Estado con respecto a toda persona, implican para éste un mayor nivel de compromiso al tratarse de personas en situación de riesgo o vulnerabilidad.[38]Tan es así que, aunado a las normas que tutelan la integridad de toda persona, la normativa internacional establece otras que tienen el objetivo de proteger la integridad de las personas privadas de libertad. De esta manera, el párrafo 2 del artículo XXV de la Declaración Americana, el párrafo 1 del artículo 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el párrafo 2 del artículo 5 de la Convención Americana consagran el derecho genérico a un trato humano, lo que se traduce un trato respetuoso de la dignidad de la persona humana. Los dos tratados también contienen normas más específicas relativas al trato de distintas categorías de reclusos, en particular la separación de reclusos según su condición jurídica, sexo y edad, y la rehabilitación de reos condenados.

36. Lo anterior, significa que, mientras que el derecho genérico a un trato humano es reconocido en cuanto derecho de toda persona privada de libertad, las demás disposiciones sobre el trato de reclusos son derechos propios de personas privadas de libertad por motivos de índole penal. En lo atinente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos al resolver el caso "Loayza Tamayo", citó una sentencia de la Corte Europea, y manifestó su acuerdo con la conclusión de dicho Tribunal, consistente en que:

> *"La infracción del derecho a la integridad física y psíquica de las personas es una clase de violación que tiene diversas connotaciones de grado y que abarca desde la tortura hasta otro tipo de vejámenes o tratos crueles, inhumanos o degradantes cuyas secuelas físicas y psíquicas varían de intensidad según los factores endógenos y exógenos que deberán ser demostrados en cada situación concreta."* [39]

37. En esa tesitura, es dable señalar que, el derecho de las personas privadas de libertad a ser tratadas humanamente y con el debido respeto a la dignidad inherente a su persona, constituye el derecho cuya alegada violación origina más denuncias. En cuanto a ello, en 1992 el Comité de Derechos Humanos, adoptó una nueva Observación General sobre el artículo 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y destacó que el derecho a un trato digno y humano, no se limita a los presos, sino que se extiende a toda persona privada de libertad *"en*

---

[37] CIDH, *Diez años de actividades*, pp. 337. Véase también el informe de la CIDH sobre la situación de los solicitantes de asilo en Canadá, infra.
[38] CIDH, Informe sobre los derechos humanos de las personas privadas de libertad en la Américas, párr. 46.
[39] Corte IDH, *Caso Loayza Tamayo*, párr. 57.

virtud de las leyes y la autoridad del Estado"[40]. Aunado a ello, el Comité sostuvo que el derecho a un trato digno y humano es un añadido a los demás derechos fundamentales de la persona, los cuales deben reconocerse y respetarse en la medida en que los requisitos legítimos de la privación de libertad lo permiten; motivo por el cual *"las personas privadas de libertad gozan de todos los derechos enunciados en el Pacto sin perjuicio de las restricciones inevitables en condiciones de reclusión."* [41]

38. De manera adicional, es dable citar el criterio sustentado por el citado Comité, en el párrafo cuarto de la referida Observación General, en los términos siguientes:

> *"Tratar a toda persona privada de libertad con humanidad y respeto de su dignidad es una norma fundamental de aplicación universal. Por ello, tal norma, como mínimo, no puede depender de los recursos materiales disponibles en el Estado Parte. Esta norma debe aplicarse sin distinción de ningún género (…)".*[42]

39. Del mismo modo, en el ámbito universal, es destacable el criterio asumido por la Comisión de Expertos, de la Organización Mundial del Trabajo que, con relación a los derechos de las personas privadas de libertad, ha sostenido lo siguiente:

> *"Es evidente que, el hecho de que hayan sido condenados por delitos no significa que los reclusos han de ser privados de derechos que se garantizan a todos (…)".*[43]

40. Por otro lado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en coincidencia con el Comité, mediante su decisión en el caso Edwards, consideró responsable al Estado no sólo del derecho de los presos a un trato humano, sino también del derecho de toda persona a la salud, consagrado por el artículo XI de la Declaración Americana de Derechos Humanos.[44] Dicho principio, ha sido reiterado y ampliado por la propia Comisión en decisiones recientes, mediante las cuales ha sustentado que: "*las normas mínimas establecidas en conformidad con los artículos [sic] 5(1) y 5(2) de la Convención (…) se aplican sin tener en cuenta la naturaleza del comportamiento por el cual la persona en cuestión ha sido encarcelada independientemente del nivel de desarrollo del Estado (…)".*[45] Además, la Comisión también destacó la importancia del derecho a la integridad, al resolver el caso Támez contra Brasil, y sostuvo que el derecho a la integridad y al trato digno, es uno de los más importantes predicados de la responsabilidad internacional de los Estados en relación con los derechos humanos el velar por la vida y la integridad física y mental de las personas bajo su custodia.

41. Tanto es el estado de vulnerabilidad e institucionalización en el que se ven colocadas las personas privadas de libertad, que los Estados han propiciado la elaboración de un número importante de instrumentos normativos para la salvaguarda específica de sus derechos fundamentales, siendo los más relevantes: las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos de 1955 (Reglas Nelson Mandela), el Conjunto de Principios para la Protección de todas las Personas Sometidas a Cualquier forma de Detención o Prisión de 1988, los Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos de 1990, la Declaración de Arusha sobre Buenas Prácticas Penitenciarias, y las Reglas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de las Reclusas y Medidas No Privativas de la Libertad para las Mujeres Delincuentes (Reglas de Bangkok), entre otras.

42. En lo atinente al derecho a la integridad, las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos (Nelson Mandela), el Conjunto de Principios para la Protección de todas las Personas Sometidas a Cualquier forma de Detención o Prisión y los Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos, establecen en forma genérica que, cualquier persona privada de la libertad, ya sea que se encuentre detenida, arrestada o compurgando una pena de prisión, será tratada con pleno respeto a la dignidad humana. Además, las Reglas Mandela, estipulan de manera precisa que, ningún recluso será sometido a tortura ni a otros tratos o penas crueles,

---

[40] Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Observación General No. 21, que sustituy la No. 9 de 1982.
[41] Ídem.
[42] Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Observación General No. 21. Este principio ha sido reafirmado y aplicado por el Comité en su dictamen en el *Caso Mukunto* vs. Zambia, párr. 6.4 (1999).
[43] Organización Internacional del Trabajo (OIT), Informe de Comisión de Expertos, 2001, párr. 145.
[44] Corte IDH, *Caso Edwards y otros* vs. Barbados, párr. 194 (2001).
[45] Corte IDH, *Caso Knights y otros* vs. Jamaica, párr. 126 (citando las decisiones de la Corte Europea en el caso Ahmed c. Australia y del Comité de Derechos Humanos en Mukong c. Camerún). Ver también Edwards c. Barbados, párr. 194.

inhumanos o degradantes, además de que se velará en todo momento por la seguridad de éstos y del personal, los proveedores de servicios y los visitantes. Finalmente, en la Declaración de Arusha, sobre Buenas Prácticas Penitenciarias, se ordena respetar y proteger los derechos y la dignidad de los reclusos y garantizar el cumplimiento de las normas nacionales e internacionales que salvaguardan sus derechos fundamentales.

43. Correlativo a lo anterior, el Conjunto de Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, reconocen que todas las personas privadas de su libertad que estén sujetas a la jurisdicción de un Estado deberán ser tratadas humanamente, con absoluto respeto a su dignidad personal, derechos y garantías fundamentales. De manera adicional, dicho instrumento establece la obligación del Estado consistente en proteger a éstas contra todo tipo de amenazas, actos o conductas que tengan como finalidad anular la personalidad o disminuir la capacidad física o mental de la persona.[46]

44. Entonces pues, con relación a la obligación del Estado como garante de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad, éste es el sujeto obligado a proteger el derecho a la vida y a la integridad personal, por lo que al ser también responsable de los establecimientos de detención, es el garante de estos derechos de los detenidos.[47] Tan es así que, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha sostenido de manera reiterada que, de las obligaciones generales de respetar y garantizar los derechos, derivan deberes especiales, determinables en función de las particulares necesidades de protección del sujeto de derecho, ya sea por su condición personal o por la situación específica en que se encuentre.[48]

45. A la par, la Corte ha sustentado el criterio de que, frente a las personas privadas de su libertad, el Estado se encuentra en una posición especial y reforzada de cuidado, toda vez que las autoridades penitenciarias, ejercen un fuerte control o dominio sobre las personas que se encuentran sujetas a su custodia. De este modo, se produce una relación e interacción especial de sujeción entre la persona privada de libertad y el Estado, caracterizada por la privativa intensidad con que el Estado puede regular sus derechos y obligaciones y por las circunstancias propias del encierro, en donde al recluso se le impide satisfacer por cuenta propia una serie de necesidades básicas que son esenciales para el desarrollo de una vida digna.[49]

46. En virtud de lo anterior, este Organismo Autónomo concluye que, cuando el Estado priva de la libertad a una persona, asume una responsabilidad especial relacionada con el respeto y la garantía de sus derechos; ya que, tanto la seguridad como la integridad de éstas, queda bajo su custodia. Por ello, uno de los principales deberes del Estado consiste en ejercer un control efectivo sobre la seguridad interna de los centros penales a su cargo, pues en la medida en que sea capaz de garantizar dicho aspecto, podrá garantizar los derechos humanos de las y los reclusos.[50] Por lo tanto, si el Estado es incapaz de mantener el orden y la seguridad al interior de los centros penales, será incapaz de cumplir con el objetivo esencial de la pena privativa de libertad: la reforma y la readaptación social de las y los internos.

47. Al respecto, la Corte Interamericana ha reiterado en múltiples ocasiones que, toda restricción a los derechos humanos de las personas privadas de su libertad debe demostrar de forma fehaciente la necesidad de ésta y regular rigurosamente la limitación de que será objeto. Y, por consiguiente, ha establecido que existen derechos como la vida, la integridad, el debido proceso, entre otros, cuya limitación o restricción se encuentra proscrita, bajo el entendido de que, toda persona privada de su libertad tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con la dignidad inherente al ser humano y, por ende, el Estado debe garantizarle el derecho a la vida y a la integridad personal. Lo anterior, hace factible concluir que, el Estado, como responsable de los establecimientos de detención, es el garante de tales derechos en favor de las personas detenidas.[51]

---

[46] Principio 1 del Conjunto de Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de la Libertad en las Américas.
[47] Corte IDH, *Caso Neira Alegría y otros* vs. Perú, Sentencia de 19 de enero de 1995, párr. 60.
[48] Corte IDH, *Caso Vélez Loor* vs. Panamá, Sentencia de 23 de noviembre de 2010 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), párr. 98
[49] Ídem, párr.152.
[50] Ídem, págs. 3-6.
[51] Corte IDH, *Caso Neira Alegría* y otros vs. Perú, Sentencia de 29 de enero de 1995, Serie C No. 20, párr. 60.

48. Luego entonces, la privación de la libertad de una persona, cuando ha cometido un delito, tiene como único objetivo, reeducarla y reinsertarla socialmente. Motivo por el cual, el Estado debe cumplir una serie de obligaciones relacionadas con su efectiva protección, a fin de que se cumplan dichos objetivos, sin que se vulneren los demás derechos humanos que éstas poseen, sobre todo, aquellos relacionados con la salvaguarda de su vida e integridad, concluyéndose entonces que, éste, tiene la obligación de protegerlos contra actos de violencia provenientes tanto de sus propios servidores, como de los demás reos.

49. En lo que a este tema concierne, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se ha pronunciado sobre la necesidad de que los Estados ejerzan un control efectivo de los centros penitenciarios, a fin de garantizar en todo momento la seguridad de las y los internos, sus familiares y de los propios trabajadores que ahí laboran; puesto que, de lo contrario, se generarían situaciones de riesgo, no sólo para la integridad, sino para la propia vida de las personas que se encuentran privadas de su libertad; contraviniéndose así una de las principales obligaciones en materia de derechos humanos: su garantía. Lo cual, además, se traduciría en la imposibilidad de que las penas privativas cumplan con su objetivo de reeducación y reinserción social.

50. De manera adicional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha señalado que la violencia carcelaria es uno de los problemas más graves que enfrentan los sistemas penitenciarios de América Latina, y comprende tanto las agresiones de los agentes del Estado contra las personas privadas de su libertad, como los actos de violencia entre internos, o de éstos contra los agentes del Estado o contra terceras personas.[52] Situación que sólo puede ser prevenida mediante la implementación de acciones concretas que, por un lado, corrijan las deficiencias que permiten el rearme de la población penitenciara y, por el otro, permitan abastecer a los centros penitenciarios de personal capacitado y en número suficiente, para asegurar el adecuado y efectivo control.

51. En el caso del Estado Mexicano, a partir de la reforma constitucional del año 2011, mediante el texto del artículo 1°, párrafos, primero y tercero, de la Constitución General de la República, se definió claramente la obligación del Estado garante, respecto de la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos, al indicar que *"todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece."*[53] Consecuentemente, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Por consiguiente, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.[54]

52. De esta manera, en el marco constitucional interno, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contempla que el respeto a los derechos humanos es un pilar fundamental de nuestro sistema normativo, lo cual, desde luego abarca al sistema penitenciario, cuya finalidad es la reeducación y reinserción social de los condenados, con base en el trabajo, la educación, la salud y el deporte.[55] Así lo establece de manera particular, el texto del artículo 18, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al estipular que, dicho sistema, deberá estar organizado primordialmente, sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para éste, la educación, la salud y el deporte, factores que son considerados como medios idóneos para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley.[56] Por lo tanto, se puede concluir que, el Estado es el garante de la seguridad de quienes se encuentren bajo su custodia en los centros penitenciarios del país.[57]

---

[52] CIDH supra nota 1, pág. 38.
[53] Ídem, art.1°.
[54] Ídem.
[55] Ídem, art. 18.
[56] Ídem.
[57] Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Recomendación 04/2016 de fecha 25 de febrero de 2017, párr. 29.

53. Adicionalmente, es importante subrayar que, tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales, como la Ley Nacional de Ejecución Penal, establecen que todas las personas privadas de su libertad, gozarán de todos los derechos previstos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, según lo dispone el artículo 9 del ordenamiento legal invocado, al establecer que cualquier persona que se encuentre privada de su libertad en un centro penitenciario mexicano, ya sea que compurgue una pena privativa de libertad, o que se encuentre bajo medida cautelar de prisión preventiva, gozará de todos los derechos previstos por la propia Constitución y los tratados internacionales signados por México, siempre y cuando, éstos no hubieren sido restringidos por la resolución o la sentencia, o su ejercicio fuese incompatible con el objeto de éstas. Por lo tanto, debe entenderse que, toda persona privada de su libertad tiene derecho a que se garantice su integridad moral, física, sexual, psicológica y, por ende, su vida, en condiciones de dignidad. [58]

54. En ese orden de ideas, conforme a lo dispuesto por los artículos 14, 15 fracción I; 19, fracción II y 20, fracciones V y VII de la Ley Nacional de Ejecución Penal, el Estado, a través de la autoridad penitenciaria, organizará la administración y operación del sistema penitenciario, sobre las mismas bases que prevé el señalado artículo 18, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo tanto, la autoridad penitenciaria tiene la ineludible obligación de supervisar que, en las instalaciones de los centros, se mantenga la seguridad, tranquilidad e integridad de las personas privadas de su libertad, del personal que ahí labora y de los visitantes, ejerciendo las medidas y acciones pertinentes para el buen funcionamiento de éstas.

55. Entonces pues, una de las funciones primordiales del Estado, será garantizar el respeto a los derechos humanos de todas las personas que se encuentren sujetas al régimen de custodia y vigilancia en un centro penitenciario[59]. Consecuentemente, la custodia penitenciaria será una atribución de la autoridad penitenciaria consistente en salvaguardar la vida, la integridad, la seguridad y los derechos de las personas privadas de la libertad, visitantes y personal adscrito a los centros penitenciarios y las demás instalaciones que determinen las disposiciones aplicables; así como hacer cumplir su normatividad[60]. Así como también, deberá preservar el orden y tranquilidad en el interior de los centros, evitando cualquier incidente o contingencia que ponga en riesgo la integridad física de las personas privadas de su libertad, visitas y personal de los mismos.

56. Bajo ese entendido, se advierte que, el Estado, tiene la obligación de salvaguardar los derechos de las personas privadas de su libertad, sin perjuicio de las restricciones inevitables asociadas a las condiciones de reclusión; pues, al encontrarse éstas bajo su resguardo, no hay ni puede haber ninguna razón para que éste, se sustraiga de su deber perentorio de tutelar la vida e integridad de las personas que se hallan sujetas a su control, y que carecen por sí mismas, de capacidad efectiva de autodeterminación y defensa.

57. Con relación a este tópico, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que, la responsabilidad del Estado, respecto a garantizar el derecho a la integridad de las personas privadas de su libertad, no se circunscribe a la obligación negativa de abstenerse de infligirles un daño; ya que, al tener éste el control sobre la vida de las y los reclusos, sus obligaciones se amplían e incluyen establecer medidas de seguridad y control necesarias para preservar la vida e integridad personal de las personas privadas de su libertad[61]. De ahí, que el Estado deba adoptar las medidas necesarias para prevenir que las personas privadas de su libertad sean atacadas por otros reclusos, por las autoridades del centro, e, inclusive por ellos mismos. Por lo cual, dichos centros deben contar con vigilancia constante y adecuada para mantener la seguridad y el control de internos.

58. Aunado a ello, en el Caso Tibi vs. Ecuador, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que, el Estado tiene además el deber de investigar, sancionar y reparar toda violación a este derecho cometido en perjuicio de las personas que se encuentran bajo su

---

[58] Ley Nacional de Ejecución Penal, http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LNEP.pdf.
[59] Ídem.
[60] Ídem.
[61] Corte IDH, supra nota 1, pág. 134.

custodia. Por lo cual, debe de iniciar de oficio y de manera inmediata una investigación efectiva que permita identificar, juzgar y sancionar a los responsables de dichas agresiones. Por consiguiente, *"el Estado es responsable de la observancia del derecho a la vida de toda persona bajo su custodia, precisamente en su condición de garante de los derechos consagrados en la Convención Americana; ya que, como lo ha señalado este Tribunal, si bien el Estado tiene el derecho y la obligación de garantizar su seguridad y mantener el orden público, su poder no es ilimitado, pues tiene el deber, en todo momento, de aplicar procedimientos conformes a Derecho y respetuosos de los derechos fundamentales, a todo individuo que se encuentre bajo su jurisdicción".*[62]

59. En suma, el Estado como garante de los derechos fundamentales de los gobernados, tiene la obligación de prevenir aquellas situaciones que pudieran conducir, incluso por acción u omisión, a la supresión de la inviolabilidad del derecho a la vida y a la integridad personal. Lo cual implica que, si una persona es detenida en buen estado de salud y posteriormente, muere, recae en el Estado la obligación de proveer una explicación satisfactoria y convincente de lo sucedido y desvirtuar las alegaciones sobre su responsabilidad, mediante elementos probatorios válidos, pues en su posición de garante, el Estado tiene tanto la responsabilidad de garantizar los derechos del individuo bajo su custodia, como la de proveer la información y las pruebas relacionadas con el destino que ha tenido la persona detenida.[63]

60. Bajo ese contexto, esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, hace patente una vez más su preocupación, por el hecho de que, desde el año 2016, se hayan presentado una serie de eventos violentos en los que, de manera lamentable, se han perdido vidas humanas; o bien, se ha dañado la integridad personal de los internos. Lo cual, ha acontecido en el Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas y en el de Fresnillo, al igual que en el caso que ahora nos ocupa. De modo tal que, en el informe de actividades 2020 de este Organismo, se puede verificar que, en 2016, se documentó un total de 16 incidentes, teniendo como resultado 10 internos lesionados y 7 fallecidos, en los 2 establecimientos penitenciarios. Mientras que, en 2017, tanto en el caso del Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas, como en el del Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo, Zacatecas, las cifras fueron las mismas; es decir, 10 internos resultaron lesionados y 8 perdieron la vida.

61. Aunado a eso, en el año 2018, en el Centro Regional de Reinserción Social de Cieneguillas, Zacatecas, se suscitaron 31 incidentes, mismos que trajeron como consecuencia 20 internos lesionados y 11 fallecidos. En tanto que, en el caso del Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo, Zacatecas, perdieron la vida 4 personas privadas de su libertad. En 2019, en el Centro Regional de Reinserción Social de Cieneguillas, Zacatecas, acontecieron 2 eventos de riña que trajeron como consecuencia la muerte de 16 internos y 6 lesionados. En tanto que, en el centro penitenciario de Fresnillo, se dieron 3 riñas que acarrearon como consecuencia 3 personas internas lesionadas. Además de ello, en el mismo periodo, la autoridad reportó 1 suicidio en cada establecimiento y 1 homicidio más en el caso de Fresnillo.

62. Este Organismo enfatiza la gravedad de la situación que atraviesa el Sistema Penitenciario en esta Entidad Federativa; ya que, pese a que como ya se apuntó renglones arriba, se han emitido diversas Recomendaciones relacionadas con hechos en los que de manera lamentable se han perdido vidas de personas privadas de su libertad, la Secretaría de Seguridad Pública, a través de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social del Estado, no han tomado medidas para abatir las condiciones que, en dichos casos, han propiciado la pérdida de vidas humanas, o el daño a la integridad de los internos. Contrario a ello, la situación ha empeorado de manera gravísima; tal y como se puede corroborar en el informe de actividades aludido. De éste, se desprende que, en 2020, solo en el Centro Regional de Reinserción Social de Cieneguillas, Zacatecas, se suscitaron 4 riñas, que devinieron en un total de 2 internos muertos y 17 lesionados; además de ello, la autoridad reportó 1 interno lesionado de manera dolosa y otro más en una tentativa de homicidio. A ello, se sumaron dos muertes por suicidio y 12 reos más lesionados, en un evento de fuga registrado en el mismo ejercicio 2020. Finalmente, en el

---

[62] Corte IDH, *Caso Juan Humberto Sánchez* vs. Honduras, Sentencia de 7 de junio de 2003, párr. 111
[63] Ídem.

caso del Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo, Zacatecas, se documentaron 2 suicidios y 1 persona privada de su libertad lesionada, a raíz de una riña.

63. En adición a todo lo anterior, para este Organismo resulta alarmante, por decir lo menos, que en la edición 2019 del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, realizado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, dicho Organismo se haya referido de manera concreta a las condiciones de gobernabilidad del establecimiento penitenciario en el cual ocurrió la muerte que se analiza. A raíz de lo cual, enfatizó la insuficiencia de personal de seguridad y custodia, que vigile el adecuado funcionamiento del Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo, Zacatecas. Situación que, efectivamente, se comprobó en el caso motivo de análisis, donde, una vez más, esta Comisión Estatal encontró insuficiente o nula vigilancia en algunas de las zonas que integran el centro, lo cual, es informado inclusive, de manera oficial, por la autoridad penitenciaria. Mientras que, en lo que hace a aspectos que promuevan la reinserción social de los internos, la Comisión Nacional encontró una deficiente separación entre procesados y sentenciados, así como insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación y una inadecuada organización y registros para el cumplimiento del plan actividades de los internos.

64. Por otro lado, en la edición 2020 de dicho Diagnóstico, el Organismo Nacional realizó observaciones relacionadas con los siguientes rubros:

- ✓ **Aspectos que garantizan la integridad de las personas privadas de la libertad Hacinamiento:**
  - Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los derechos humanos.
- ✓ **Aspectos que garantizan una estancia digna:**
  - Deficiencias en la alimentación.
  - Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las personas privadas de la libertad.
  - Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para la comunicación con el exterior.
  - Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de la cocina y/o comedores.
- ✓ **Condiciones de gobernabilidad**
  - Presencia de actividades ilícitas.
- ✓ **Reinserción social de las personas privadas de la libertad**
  - Deficiente separación entre procesados y sentenciados.
  - Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad.
  - Inadecuada vinculación de la persona privada de la libertad con la sociedad.

65. Con base en tales resultados, este Organismo tiene por cierto que, la Dirección General de Prevención y Reinserción Social del Estado de Zacatecas, incumple de manera repetida su obligación reforzada de garantizar el derecho a la vida e integridad de las personas que se encuentran privadas de su libertad, en los centros penitenciarios a su cargo. Desatención que trae como efecto, la contravención de los diversos instrumentos jurídicos que, como ya se estableció con antelación, amparan dichos derechos en favor de todo gobernado, incluyendo a las y los internos. Desacato que, como en el caso ocurrió, involucra la transgresión de los derechos fundamentales de dichas personas, específicamente, el derecho a la vida y el derecho a la integridad y seguridad de su persona; lo cual, es contrario a la obligación del Estado Mexicano, de velar por la vida e integridad de las y los internos, que debería manifestarse observando en todo momento lo dispuesto por el *corpus juris* invocado a lo largo del presente documento, así como, en lo particular, por el artículo 18, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que, en conjunto con la Ley Nacional de Ejecución Penal, reconoce el derecho de las personas privadas de la libertad a la reinserción social.

D. De la violación del derecho a la vida e integridad personal, en perjuicio de VD†.

66. En el caso concreto, este Organismo recopiló evidencias suficientes que acreditan que, el Estado, incumplió con su función reforzada, como ente garante de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad. Específicamente, en perjuicio de **VD†**, pues se tiene debidamente comprobado que su deceso, ocurrió en el interior del Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo, Zacatecas, precisamente, bajo la custodia del Estado, según

se desprende de las constancias que integran el sumario. Muerte que, de acuerdo con los resultados de la necropsia practicada a su cadáver por el Perito Médico Legista, adscrito a la Fiscalía General de Justicia, del Estado de Zacatecas, y que obra en autos de la carpeta de investigación [...], originada con motivo de los hechos que aquí se dilucidan, y cuya indagación se encuentra a cargo el Agente del Ministerio Público, adscrito a la Unidad Especializada en Investigación Mixta número VI del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas**,** fue a causa de **asfixia por ahorcamiento con lazo.**

67. Motivo por el cual, esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, en su calidad de Órgano de Estado, responsable de la protección y defensa de los derechos humanos en el territorio zacatecano, se encuentra obligada a conocer de los hechos, al advertir que la muerte de **VD†** se debió a la inseguridad imperante y la falta de personal que ejerza y cumpla eficazmente con funciones de seguridad y custodia, en el Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo, Zacatecas. Circunstancias que, esta Comisión ha evidenciado con anterioridad dentro de las diversas Recomendaciones emitidas con motivo de hechos en los cuales, al igual que en el que ahora nos ocupa, diversos factores confluyeron para que, a la postre, se perdiera una vida humana.

68. Por lo tanto, se advierte una vez más que, el Estado Mexicano, incumplió con su obligación de asegurar y garantizar los derechos humanos de las personas que se encuentran privadas de su libertad en el Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo, Zacatecas. Circunstancia de reclusión en la cual, como ya se indicó, la autoridad penitenciaria, al encargarse de su custodia, asume la calidad de garante, lo cual, lo obliga a preservar todos aquellos derechos que por disposición judicial han sido restringidos, puesto que, quienes se encuentran en centros de reclusión, están sujetos a un régimen jurídico particular, y dicho sometimiento o especial sujeción, no justifica el detrimento o menoscabo de sus derechos fundamentales, como en el caso sucedió con la supresión del derecho a la vida, en perjuicio de **VD†.**

69. Así las cosas, en cumplimiento a lo ordenado por la regla 71 de las Reglas Mandela[64], disposición que mandata que, con independencia de que se inicie investigación interna, el Director de cualquier centro penitenciario deberá notificar sobre el fallecimiento, desaparición o lesión grave de un interno a una autoridad judicial, u otra que sea competente e independiente de la que administre el centro, siempre y cuando cuente con facultades de investigación, el **DCPF1**, entonces Director del Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo, Zacatecas, notificó el fallecimiento de **VD†**, ocurrido el día 29 de febrero de 2020, al entonces Director General de Prevención y Reinserción Social del Estado de Zacatecas, remitiendo copia del oficio mediante el cual lo hizo, a este Organismo.

70. Por tanto, de conformidad con lo ordenado por los diversos instrumentos jurídicos que sustentan la presente Recomendación, y, además, con fundamento en el Principio 34, del Conjunto de Principios para la Protección de todas las Personas Sometidas a Cualquier forma de Detención o Prisión[65], se inició la investigación de los hechos. Además, esta Comisión verificó que, en cumplimiento a dichos instrumentos jurídicos, la Representación Social también inició su respectiva indagatoria; lo cual, se corrobora con la compulsa de la carpeta de investigación [...], de la que se desprende el acta de aviso de hechos de fecha 29 de febrero de

---

[64] Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, 1. “Sin menoscabo de que se inicie una investigación interna, el director del establecimiento penitenciario comunicará sin dilación todo fallecimiento, desaparición o lesión grave de un recluso a una autoridad judicial u otra autoridad competente que sea independiente de la administración del establecimiento penitenciario y esté facultada para llevar a cabo investigaciones expeditas, imparciales y efectivas de las circunstancias y causas de ese tipo de ca sos. La administración del establecimiento penitenciario cooperará plenamente con esa autoridad y garantizará la preservación de todas las pruebas. 2. La obligación enunciada en el párrafo 1 de esta regla se aplicará igualmente siempre que existan motivos razonables para considerar que en el establecimiento penitenciario se ha cometido un acto que constituya tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, independientemente de que se haya recibido o no una denuncia formal. 3. Siempre que existan motivos razonables para considerar que se ha cometido alguno de los actos mencionados en el párrafo 2, se tomarán medidas de inmediato para velar por que ninguna persona que pudiera estar involucrada participe en la investigación o mantenga contacto con los testigos, la víctima o la familia de esta”.

[65] “Si una persona detenida o presa muere o desaparece durante su detención o prisión, un juez u otra autoridad, de oficio o a instancias de un miembro de la familia de esa persona o de alguna persona que tenga conocimiento del caso, investigará la causa de la muerte o desaparición. Cuando las circunstancias lo justifiquen, se llevará a cabo una investigación iniciada de la misma manera cuando la muerte o desaparición ocurra poco después de terminada la detención o prisión. Las conclusiones de esa investigación o el informe correspondiente serán puestos a disposición de quien lo solicite, a menos que con ello se obstaculice la instrucción de una causa penal en curso”.

2020, en la cual, de manera general se especificó que, a las **10:50 horas** de esa fecha, el **PI3**, elemento de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, notificó a la guardia que, previamente, se habría comunicado el **AJ**, en ese momento personal del área Jurídica del Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo, Zacatecas, para notificar sobre el deceso del aquí agraviado.

71. Razón por la cual, personal de la Unidad de Investigación Especializada en Investigación Mixta del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas, se trasladaron hasta el centro penitenciario, logrando corroborar, al tener a la vista la celda número 6 del área de separos, que **VD†**, se encontraba en posición suspendida completa, con una venda blanca en el cuello, colocada en el tubo de la regadera. Con motivo de dicha acta, se inició la investigación correspondiente y el Fiscal del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación Mixta del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas, ordenó los actos de investigación, tendentes al esclarecimiento de los hechos. Siendo importante mencionar que esta información se sustenta además con las comparecencias de los elementos de Policía de Investigación **PI1, PI2, PI3** y **PI4.**

72. Retomemos ahora el oficio signado por el **DCPF1**, entonces Director del Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo, Zacatecas, del cual remitió copia a esta Institución. En dicho documento, marcado con el número **SSP/DPRS/CF/730/2021**, el ex Director del establecimiento penitenciario informó a su entonces superior jerárquico de manera general que, siendo las **10:30 horas** del día **29 de febrero de 2020**, según se desprende del parte informativo elaborado por el **C. PP2**, Comandante del Primer Grupo de Guardia de dicho establecimiento, el **C. PP1**, personal de seguridad y custodia, quien se encontraba en servicio en el área de separos solicitó vía radio la presencia de un Comandante, por lo que al hacerse presente el citado Comandante en el área de separos, fue informado de que en la estancia número 6 se encontraba una persona colgada del cuello con un trozo de venda y sujetado del tubo de la regadera y que quien informó del hallazgo de dicha persona, que ahora se sabe se trata del joven **VD†**, fue el interno **PPL3**; a raíz de lo cual se acordonó el lugar, se pasó lista extraordinaria. Asimismo, el **DCPF1** señaló que se actuó conforme al "protocolo" (no estableció cuál) y se dio aviso inmediatamente al área médica, corroborando el doctor que **VD†**, ya no contaba con signos vitales. Toda esta información, en efecto, coincide con el oficio que, en esa misma fecha 29 de febrero de 2020, dirigió el **C. PP2**, al **DCPF1.**

73. Aunado a lo anterior, este Organismo observa que, en cumplimiento a la Regla 69[66], de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, (Reglas Nelson Mandela), la **C. VI1** y la **C. VI3** fueron debidamente notificadas sobre el deceso de **VD†**. Información que se desprende de la integración de la referida carpeta de investigación, en la que obran las comparecencias que, en calidad de testigos de identidad y de reconocimiento de cadáver, les fueran recabadas a las **19:20** y **19:30 horas** respectivamente, por el Fiscal del Ministerio Público número 11 de Atención Permanente del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas. Por lo que, en ese sentido, con relación al deber que tienen las autoridades penitenciarias de informar a los familiares de los internos, cuando éstos pierden la vida estando bajo su custodia, independientemente de las causas, esta Comisión advierte que, si bien el deceso de **VD†** no fue notificado por quien entonces ejercía el cargo de Director del Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo, Zacatecas, no se retardó de manera injustificada o prolongada, informar el que sus familiares tuvieran conocimiento de su deceso.

74. Ahora bien, tocante a las dimensiones del espacio donde sucedió el hecho, en relación con el número de internos que lo habitaban, es dable citar la Guía Complementaria "Agua, saneamiento, higiene y hábitat en las cárceles",[67] elaborada en 2013 por el Comité Internacional de la Cruz Roja, en coordinación con la Organización de las Naciones Unidas. A través de dicho documento se estableció que, aun cuando existen recomendaciones de diversos Organismos

---

[66] Ídem, Regla 69. "En caso de fallecimiento de un recluso, el director del establecimiento penitenciario informará inmediatamente a sus familiares más allegados o a la persona designada como contacto para casos de emergencia. Ante un supuesto de enfermedad o lesión grave o de traslado de un recluso a un centro hospitalario, el director deberá notificar a las personas que el recluso haya designado para recibir información relacionada con su estado de salud. Se respetará la solicitud expresa Primera parte, del recluso de que no se informe a su cónyuge o familiar más cercano en caso de enfermedad o lesión".

[67] La Guía Complementaria "Agua, saneamiento, higiene y hábitat en las cárceles", puede consultarse en: https://www.icrc.org/es/doc/assets/files/publications/icrc-002-4083.pdf

Internacionales, en lo referente a las condiciones de habitabilidad de los espacios destinados para los internos, como pueden ser las de ventilación, iluminación e higiene. No existe una norma universal respecto a las dimensiones de espacio, por lo cual se señalaron las medidas que aproximadamente se manejan en diversos países, incluyendo a México, en donde la medida sugerida para celdas individuales es de **4m²**, mientras que **15m²**, es la medida propuesta para celdas triples.[68]

75. Relativo a lo anterior, el Comité Internacional de la Cruz Roja, ha establecido recomendaciones generales con el propósito de definir un criterio sensato de habitabilidad y sugiere lo siguiente:

Alojamiento en celda individual:	**Alojamiento en celda múltiple**
—Un detenido. — Dimensión de la celda de 5.4 m2 —Incluye una cama, pero no los servicios sanitarios.	— Diez detenidos. — Dimensión del dormitorio de 3.4 m2 por recluso (superficie total: 34 m2). — Incluye el espacio para las literas y servicios sanitarios.

76. Al respecto, se tiene que, según información proporcionada por el **DCPF1**, entonces Director del Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo, Zacatecas, el número total de internos albergados en la celda número 6 del área de separos, en fecha 29 de febrero de 2020 era de 4, incluyendo al agraviado; lo cual se repite en el caso de las otras 5 celdas que se ubican en dicha área, donde del mismo modo se encontraban albergadas 4 personas en cada una de éstas. En lo atinente, este Organismo considera oportuno recordar que, según se documentó en la Recomendación recaída al expediente **CDHEZ/325/2018**, cada una de las celdas del área de separos del establecimiento penitenciario que nos ocupa, se encuentra diseñada para ser ocupada por un solo interno, en virtud de que solo cuenta con un camastro.

77. Lo anterior, guarda estrecha relación con el factor de sobrepoblación y hacinamiento, circunstancia por la cual, para este Organismo, es imperativo evidenciar la sobrepoblación existente en el área donde sucedieron los hechos materia de investigación. Siendo conveniente para tales efectos, abordar el documento denominado: *"La sobrepoblación en los centros penitenciarios de la República Mexicana",* de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En dicha publicación, el Organismo Nacional propone que, para evaluar la sobrepoblación penitenciaria en nuestro país, debe utilizarse el criterio aritmético universal de medición, que establece la división de la población total sobre la capacidad instalada, menos uno, por cien, a fin de identificar el porcentaje de sobrepoblación en una hipótesis de ocupación del 100%.

78. Así pues, en lo atinente al factor de sobrepoblación, en el área de separos del Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo, Zacatecas, se obtienen los siguientes resultados:

Datos	**Aplicación de la fórmula**
Capacidad instalada en el área de separos del Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo, Zacatecas: **6** Población total: **24**	*Sobrepoblación* =24/6= **4** Sobrepoblación = 4-1= **3** *Sobrepoblación* = 3*100= **300**
Resultado	*Sobrepoblación* = **300 %**

79. Razón por la cual, es posible deducir que los internos que en fecha 29 de febrero de 2020 habitaban las celdas del área de separos, incluyendo al agraviado, vivían en condiciones de hacinamiento, al verse excedida la capacidad original de dichas celdas en un **300%**; lo que representa un nivel de **sobrepoblación en condición de urgencia** y, por ende, ubica a dicho espacio en el nivel de **riesgo crítico**, con el consecuente **nivel de operación en operación urgente**, haciéndose necesaria la implementación de la **fase de contingencia y restitución**, ejerciendo **acciones apremiantes de mitigación y restitución de daños, acorde al semáforo de población penitenciaria**[69]. Medidas que este Organismo considera emergentes, siempre dentro del marco del irrestricto respeto a los derechos fundamentales y a la dignidad humana de las personas privadas de su libertad.

---

[68] Centros de Prevención y Readaptación Social, Normas de Diseño, Secretaría de Gobernación. México, 1982.
[69] El semáforo de sobrepoblación penitenciaria puede consultarse en la página 21, del documento: *"La sobrepoblación en los centros penitenciarios de la República Mexicana"*, pág. 21.

80. A efectos de lo anterior, esta Comisión, en correspondencia con su homólogo nacional, sugiere tomar en consideración los siguientes factores:

1. Alojamiento insuficiente y hacinamiento.
2. Imposibilidad para la distribución y separación de los internos.
3. Atención en emergencias médicas y decesos.
4. Ausencia de espacios y servicios para la reinserción social (áreas deportivas, educativas, laborales) y para la convivencia familiar, íntima y área de locutorios.
5. Carencia de servicios básicos para la población reclusa (agua, gas) y de materiales (uniformes, calzado).
6. Problemas severos de higiene.
7. Aplicación de sanciones disciplinarias y acciones de contención de la violencia por conflictos derivados por la sobrepoblación y la carencia de algunos servicios.
8. Reacción y contención inmediata frente al incremento de incidentes violentos y de tortura y/o maltrato.
9. Aplicación de acciones previstas en los programas preventivos de mitigación en condiciones de sobrepoblación.
10. Incremento del personal de seguridad para la supervisión.
11. Conflictos en el control de grupos de autogobierno y de actividades ilícitas.
12. Ausencia de capacitación y actualización, frente a situaciones de emergencia al interior de los centros[70].

81. En adición a lo anterior, este Organismo considera decisivo establecer la relación que se puede encontrar entre la sobrepoblación y las condiciones de hacinamiento, factor que se puede presentar, debido al volumen o densidad en un espacio o unidad determinada, aunque sea dentro de una misma institución. En las Recomendaciones e Informes Especiales de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y que este Organismo Estatal retoma, se ha resaltado que, el hacinamiento, puede ser consecuencia de la sobrepoblación, redundando en el deterioro de las condiciones de vida digna que deben tener los hombres y mujeres en reclusión. Motivo por el cual, es considerado, en este sentido, como uno de los factores que contribuyen a la violación de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, ya que, entre otras cosas:

- Supone muchas veces riesgos para la seguridad del interno.
- Influye en la calidad de la prestación de servicios esenciales para la reinserción social.
- Restringe las posibilidades de promover el trabajo en los internos por falta de espacios destinados a talleres.
- Limita los servicios de la educación formal y extraescolar a los internos por la carencia de aulas.
- Restringe la actividad deportiva por la limitación de canchas y espacios para toda la población.
- Disminuye el acceso a la capacitación para el trabajo en los centros de reinserción.
- Nulifica las opciones de esparcimiento debido a la formación de un ambiente desfavorable y de desorden.
- Imposibilita la adecuada asistencia médica de los reclusos.
- Crea un entorno peligroso para el personal del Centro.
- Imposibilita el cumplimiento de las normas establecidas por los instrumentos internacionales para el régimen de detención, definidas por las Naciones Unidas, que exigen condiciones adecuadas de luz, aire, e intimidad, lacerando severamente la dignidad de los internos y sus derechos humanos[71].

82. Por lo tanto, si en fecha 29 de febrero de 2020, el número total de internos específicamente en el área de separos del Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo, Zacatecas, era de **24**, distribuidos en 6 celdas, diseñadas para **1 interno cada una**, es evidente que, la población total del área estaba excedida por **3 internos**, lo que, en porcentaje, como ya se advirtió líneas arriba, representa un **300%** más de la capacidad instalada; circunstancia que esta Comisión

---

[70] Sugerencias de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a través del documento: "*La sobrepoblación en los centros penitenciarios de la República Mexicana"*.

[71] Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a través del documento: "*La sobrepoblación en los centros penitenciarios de la República Mexicana"*, edición 2016, pág. 26-27.

reitera una vez más como inaceptable, pues es un factor que, en los últimos años ha subsistido en algunas de las áreas que integran el Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo, Zacatecas.

83. Lo cual, por ejemplo, en el año 2018, contribuyó a que perdieran la vida las víctimas identificadas dentro de los expedientes **CDHEZ/325/2018, CDHEZ/454/2018** y **CDHEZ/509/2018**, también en el área de separos del centro penitenciario, donde al igual que en el caso que ahora nos ocupa, este Organismo detectó sobrepoblación y que los internos viven en condiciones de hacinamiento. Dichas circunstancias, revelan el evidente incumplimiento de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social como agente del Estado, garante de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad, al no haberse atendido de manera puntual, las Recomendaciones emitidas por este Organismo, con motivo de tales hechos; así como las que, en lo general, han sustentado los Tribunales Internacionales, en la interpretación de los diversos instrumentos jurídicos que sustentan la que ahora se formula.

84. Incumplimiento que, además, se evidencia con la constante falta de personal de seguridad y custodia del Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo, Zacatecas, y que también fue motivo de observación en los instrumentos recomendatorios precitados; lo cual, fue una vez más factor que convergió en la pérdida de la vida de **VD†**. Dicho factor, se corrobora con el informe rendido por el **DCPF1**, entonces Director del centro penitenciario, quien, en fecha 20 de marzo de 2020, remitió el rol de servicio del personal a su cargo, del cual, se desprende que, en el horario comprendido entre las **08:00** y las **19:30 horas,** del día 29 de febrero de ese mismo año, horario en que aconteció dicho deceso, se encontraba distribuidos en el establecimiento: los Comandantes **PP3** y **PP2**; los Oficiales Penitenciarios **PP4, PP5, PP6, PP7, PP8, PP9, PP10, PP11, PP12, PP13, PP1, PP14, PP15, PP16, PP18** y **PP19**; así como los elementos de Policía Estatal Preventiva de Zacatecas **PEP1, PEP2, PEP3, PEP4, PEP5**, y PEP6, dando un total de **24 personas**; empero, solamente un Oficial Penitenciario se encontraba asignado al cuidado de los internos ubicados en el área de separos, mismos que, como ya se apuntó eran en total 24, incluyendo al agraviado.

85. Lo anterior, resulta preocupante de por sí, y se torna mucho más grave si tomamos en consideración que, en su comparecencia de fecha 22 de julio de 2020, el **C. PP1**, Custodio Penitenciario que el día de los hechos se encontraba a cargo de dicha área, mencionó que unos días antes habría ocurrido un amotinamiento en el cual el custodio a cargo de dicha zona fue despojado de las llaves, además de que una persona resultó lesionada; siendo el motivo por el cual, él no entró a la celda número 6 del área de separos, sino que decidió esperar el apoyo del **CMTE. PP2.** Dicho custodio, además, constató que él se encontraba al pendiente de las 8 puertas ubicadas en el área de separos y bajo el cuidado de los 24 internos que las habitaban; información que coincide con la que a su vez vertió el **CMTE. PP2**, quien agregó que, debido a la falta de personal, en pocas ocasiones el custodio asignado a los separos, es apoyado por otro debido a la falta de personal. Circunstancia que esta Institución reprueba de manera contundente porque además de no garantizar la debida custodia del Estado sobre las personas privadas de su libertad, evidentemente ponen en riesgo la propia seguridad del personal de seguridad y custodia que, en su caso, sea asignado a los separos del Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo, Zacatecas.

86. Por otro lado, de la información oficial referida, este Organismo también advierte que, el número total de internos el día 29 de febrero de 2020, en el Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo, Zacatecas, era de **323** personas privadas de su libertad, mientras que el personal penitenciario, se distribuyó de la manera siguiente:

1. En el turno comprendido entre las 08:30 y las 19:30 horas: **2** Comandantes, **16** elementos de seguridad y custodia y **6** elementos de la Policía Estatal Preventiva de Zacatecas.
2. En el turno de las 19:30 del 29 de febrero de 2020, a las 01:30 horas del 1º de marzo de 2020: **2** Comandantes, **16** elementos de seguridad y custodia y **6** elementos de la Policía Estatal Preventiva de Zacatecas.
3. En el turno de las 01:30 a las 06:30 horas del día 1º de marzo de 2020: **2** Comandantes, **16** elementos de seguridad y custodia y **6** elementos de la Policía Estatal Preventiva de Zacatecas.

> 4. En el turno de las 06:30 a las 08:45 horas del día del día 1º de marzo de 2020: **2** Comandantes, **16** elementos de seguridad y custodia y **6** elementos de la Policía Estatal Preventiva de Zacatecas.

87. Se observa entonces que, en todos los turnos, el número de personal ascendía a **24 personas**, a cargo de un total de **343 personas privadas de su libertad**, lo que significa que, en promedio, cada elemento, ya sea de Seguridad y Custodia, o de Policía Estatal Preventiva, se encontraba a cargo de **14.2 internos**. Al respecto, es de provecho referirse al Manual de Cárceles. Guía para la planeación y el diseño arquitectónico[72] retomado por la Comisión Nacional de los derechos Humanos, en el documento denominado "La sobrepoblación en los centros penitenciarios de la República Mexicana", (en el cual, sin soslayar el hecho de que, con independencia de la atención que debe darse a las diferentes zonas de la prisión, así como a los turnos de personal, aspectos que también deben atenderse con la misma importancia), se propuso lo siguiente:

Nivel de seguridad de la prisión	**Número de internos por custodio.**
Alta	1
Media	10
Baja	20

88. Por lo tanto, si se toma en cuenta que el Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo, Zacatecas, está catalogado con un nivel de seguridad bajo, pareciera que no se contravienen las disposiciones relativas al número de internos que deben ser vigilados por cada elemento de seguridad y custodia, atendiendo a la clasificación de la seguridad del centro de que se trate; puesto que, con relación al tema del número de internos que corresponde vigilar a cada elemento de seguridad y custodia, resulta crucial hacer énfasis en que la Organización de las Naciones Unidas, se ha pronunciado en reiteradas ocasiones, en cuanto a la importancia que debe establecerse entre el número de personal de seguridad y el total de internos.

89. Sin embargo, es importante subrayar que algunas personas privadas de su libertad son de alta peligrosidad, por lo que, en consecuencia, podrán aplicarse medidas especiales de seguridad, tal y como lo prevé el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo cual, implicaría entonces que, por ejemplo, se deba aumentar el número de custodios o policías penitenciarios que deban vigilar a cierto número de internos, o ciertas áreas, de acuerdo con la tabla anterior. En el caso que nos ocupa, debe retomarse el hecho de que, del personal disponible, solo un elemento de Seguridad y Custodia estaba bajo el cuidado de los 24 internos del área de separos; circunstancia que, evidentemente contraviene la obligación reforzada de cuidado, que el Estado debe asumir, en cuanto a los derechos humanos de las personas privadas de su libertad, en los centros de detención sujetos a su jurisdicción; hecho que, innegablemente, impactó en la falta de control y seguridad efectiva de esa zona, trayendo como consecuencia, la pérdida de la vida de **VD†**.

90. Dicha situación, es cada vez más preocupante para este Organismo, pues no es la primera vez que se acredita la insuficiencia de personal en las diversas áreas en que se divide el Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo, Zacatecas. En las Recomendaciones recaídas dentro de los expedientes **CDHEZ/325/2018**, **CDHEZ/454/2018** y **CDHEZ/509/2018**, por hechos en que también se perdieran vidas humanas de personas privadas de su libertad en dicho establecimiento, se hizo hincapié en dicho factor. En el primer caso, se acreditó que, debido a la falta de personal penitenciario, la persona encargada de la vigilancia del circuito cerrado atendía otras labores, al momento de los hechos en que perdiera la vida, la víctima directa identificada, lo que impidió que pudiera percatarse de lo sucedido con el monitoreo; en el segundo, se demostró que, en el área del gimnasio, zona donde perdió la vida la víctima identificada, ningún elemento de seguridad y custodia se encontraba a cargo de la vigilancia del área. Aunado a ello, en ambos casos, este Organismo acreditó que solo un elemento de seguridad y custodia tenía a su cargo la vigilancia de 27 internos.

91. En esa tesitura, se colige que, la falta de personal de seguridad y custodia en el centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo, Zacatecas, es una de las deficiencias que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas, por conducto de la Dirección General

---

[72] ROJAS A., Roberto et al. *Cárceles. Guía para la planeación y diseño arquitectónico*. Precoor. México. 2012. pág. 260.

de Prevención y Reinserción Social del Estado de Zacatecas, ha omitido atender a lo largo de los últimos años, a pesar de las Recomendaciones precitadas y de las observaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a través del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria. De lo contrario, a la fecha se hubieren implementado acciones eficientes para corregir tales deficiencias, a partir de la muerte de las víctimas identificadas con motivo de la integración de los citados expedientes. De modo tal que, para la fecha en que sucedieron los hechos que motivan esta Recomendación, la autoridad penitenciaria ya habría mejorado las condiciones de seguridad y aumentado el personal encargado de vigilar todos los espacios en que se ha dividido el centro, especialmente de las áreas donde se han suscitado los decesos que originaron dichos expedientes; pues es evidente que, por ejemplo, el área de separos, constituye una de las zonas con mayor incidencia de sobrepoblación y hacinamiento. A lo cual se suma la insuficiencia de personal y de cámaras de vigilancia o, en su defecto, de un ineficiente o inexistente monitoreo de dichas cámaras, como más adelante se analiza en el caso concreto que nos ocupa.

92. Con lo anterior, se demuestra una vez más que, la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas, incumple de manera reiterada con su posición de garante de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad; en el presente caso, específicamente de la población penitenciaria del Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo, Zacatecas, al no aumentar el número de personal operativo que se requiere para la supervisión y vigilancia de las diferentes áreas en las que se divide dicho establecimiento. Lo cual, representa un riesgo para dicha población, repercutiendo, como en el caso nos ocupa, en la violación al derecho a la vida e integridad de **VD†**; pero, además, impacta de manera directa en las condiciones de seguridad en que los familiares de los internos conviven con éstos, y en las que el personal que ahí labora desempeña sus funciones.

93. Por otro lado, retomando el tema de la falta de cámaras de vigilancia en todas las zonas del Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo, Zacatecas, es importante mencionar que, en el presente caso, el **DCPF1**, entonces Director del Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo, Zacatecas, se condujo de nueva cuenta con falsedad ante este Organismo, lo cual representa un indebido entorpecimiento a las investigaciones iniciadas para el esclarecimiento de los hechos y conlleva el incumplimiento, por parte de las autoridades, de las garantías de protección, respeto y garantía de los derechos humanos de los internos, sumado también al incumplimiento las obligaciones de prevención, investigación y sanción de los posibles responsables de violentar dichos derechos.

94. Específicamente, en el caso que motiva esta Recomendación, en fecha 20 de marzo de 2020, el ex Director informó de manera textual: *"…Por lo que respecta al video de vigilancia solicitado, es materialmente imposible ya que en dicho lugar no existe cámara de vigilancia donde fue encontrado el hoy occiso…"* (Sic). Sin embargo, en fecha 28 de julio de 2020, la **DCPF2**, quien en ese momento fungía como Directora del establecimiento, proporcionó copia del video que corresponde a la cámara de vigilancia ubicada en el pasillo de separos, lugar donde acontecieron los hechos. Dicho funcionario, incurrió en conducta similar en el caso del expediente **CDHEZ/509/2019**; del que deriva la Recomendación **04/2020**, pese a haber cámaras ubicadas en el área de separos, como se comprobó en el asunto relacionado con el expediente **CDHEZ/325/2018**, las grabaciones del lugar no fueron proporcionadas en su totalidad, ni a este Organismo, ni a la Representación Social. Motivo por el cual, la Dirección General de Prevención y Reinserción Social del Estado de Zacatecas, deberá tomar en consideración dicha conducta reiterativa, al momento de instaurar el procedimiento administrativo correspondiente en su contra.

95. Por otra parte, esta Comisión Estatal no pasa desapercibido que, de la lista de personal disponible en fecha 29 de febrero de 2020, ningún elemento de Seguridad y Custodia, o de la Policía Estatal Preventiva de Zacatecas, se encontraba asignado al monitoreo del circuito cerrado, incluso dicho servicio ya no aparece en el rol de servicios proporcionado por el **DCPF1**, contrario por ejemplo a lo documentado dentro del expediente **CDHEZ/325/2018**, del que derivó la Recomendación **02/20**, en el cual se acreditó que la falta de personal suficiente impactó en el debido monitoreo de dicho sistema, pues, la persona encargada de ello, al momento de los acontecimientos, se encontraba realizando otras labores, precisamente, debido a la falta de elementos de seguridad y custodia, que cubran la vigilancia de todo el centro. Por lo tanto, con

dichos antecedentes, la autoridad penitenciara debió, además de incrementar el personal del centro penitenciario, asegurarse de que siempre, una persona debidamente capacitada para ello, se encuentre monitoreando las cámaras de vigilancia; sin embargo, este Organismo logró acreditar que, en lugar de ello, se desapareció dicho servicio, impactando de manera directa en la nula vigilancia del circuito y, como en el caso ocurrió, fue un factor que convergió en la muerte del agraviado.

96. Lo anterior, se puede corroborar con el contenido del acta circunstanciada de fecha 28 de julio de 2020, correspondiente a la inspección del video de vigilancia, en el cual este Organismo pudo documentar movimientos que, de haberse monitoreado el sistema de vigilancia, quizás hubieran permitido la intervención de la autoridad penitenciaria, antes de que el agraviado perdiera la vida. Pues no puede pasarse por alto que, durante transcurso del video, es fácil detectar que se intentó obstruir la cámara con la colocación de una colchoneta en un tendedero; y que, en la celda donde perdió la vida **VD†**, previo a que su cuerpo fuera localizado, se aprecia que además de él, ingresaron y luego salieron otros internos. Por lo tanto, es de imperiosa necesidad que el Ministerio Público agote esa línea de investigación, ya que, de las constancias aportadas por el Fiscal del Ministerio Público, Adscrito a la Unidad Especializada en Investigación Mixta VI, del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas no se desprende que éste haya solicitado los videos de vigilancia al centro penitenciario en comento y, por ende, que se investigue un posible homicidio, pese a que la investigación se encuentra aún en trámite.

97. Tales observaciones, son prueba de que tanto en los asuntos rememorados como en el que motiva esta Recomendación, el Estado no ha logrado probar que cumplió con su posición de garante de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad. Puesto que, acorde al criterio sustentado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos:

> *"corresponde a la parte demandante, en principio, la carga de la prueba de los hechos en que se funda su alegato; no obstante, se ha destacado que, a diferencia del derecho penal interno en los procesos sobre violaciones de derechos humanos, la defensa del Estado no puede descansar sobre la imposibilidad del demandante de allegar pruebas, cuando es el Estado quien tiene el control de los medios para aclarar hechos ocurridos dentro de su territorio"*[73]*.*

98. Con base en ello, se puede afirmar que, cuando se investigan violaciones a derechos humanos, el Estado tiene la obligación de desvirtuar los hechos atribuidos a sus agentes, pues es éste el que tiene el control de todos los medios de convicción para aclarar los hechos ocurridos, sobre todo cuando, como ya se ha evidenciado, la víctima del quebranto a sus derechos humanos, se encuentra en estado de vulnerabilidad, como sucedió en el caso específico de **VD†,** que al estar privado de su libertad, se encontraba bajo su total subordinación, de forma que el Estado, debió asumir una responsabilidad especial, reforzada, de respecto a la garantía de sus derechos, al depender su integridad personal y su vida, completamente de éste.

99. En tal sentido, este Organismo insiste en que, el nulo monitoreo de las cámaras de vigilancia instaladas en el Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo, Zacatecas, aunado a la insuficiencia de personal que realice eficazmente las labores de seguridad y custodia de todas las áreas en que dicho establecimiento se divide, imposibilita que, en la mayoría de los eventos violentos, se pueda saber con exactitud qué fue lo que sucedió; y en consecuencia, dificulta la investigación del Ministerio Público. En el caso concreto de la muerte de **VD†**, se advierte además que, pese a que se entrevistó a los internos **PPL3** y **PPL1** la Representación Social no cuenta con datos de prueba suficientes tendentes a inferir si alguna persona participó de los hechos en donde éste perdió la vida, para así poder judicializar el asunto, o si por el contrario, efectivamente el interno atentó contra su vida; lo cual se repitió en el caso de la investigación de esta Comisión, debido a que los internos a los que se entrevistó, se negaron a colaborar; circunstancia que se atribuye de manera directa al Estado, pues el hecho en sí representa una violación a sus derechos humanos, de acuerdo con los estándares ya establecidos en el presente documento recomendatorio.

---

[73] Corte IDH. Caso Escher y otros Vs. Brasil, sentencia de excepciones Preliminares, fondo, reparaciones y costas del 6 de julio de 2009. Párr. 127."·

100. En el contexto anterior, este Organismo nota que la Dirección General de Prevención y Reinserción Social del Estado de Zacatecas, ha omitido atender las deficiencias que han sido reiteradamente evidenciadas en las Recomendaciones citadas a lo largo de la que ahora se emite y que se repitieron en el caso de la muerte de **VD†**, y los detalles aquí evidenciados, dan cuenta de ello. Siendo incompatibles con el Principio XX del Conjunto de Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad de las Américas, que al efecto y entre otras cuestiones disponen que, el personal que tenga bajo su responsabilidad la dirección, custodia, tratamiento, traslado, disciplina y vigilancia de personas privadas de libertad, deberá ajustarse, en todo momento y circunstancia, al **respeto a los derechos humanos de las personas privadas de libertad** y de sus familiares. **Debiendo seleccionarse cuidadosamente**, teniendo en cuenta su integridad ética y moral, sensibilidad a la diversidad cultural y a las cuestiones de género, **capacidad profesional, adecuación personal a la función, y sentido de responsabilidad.** Lo cual implica que, en los lugares de privación de libertad, el Estado debe apostar por la elección **de personal calificado y suficiente** para garantizar la seguridad, vigilancia, custodia, y para atender las necesidades médicas, psicológicas, educativas, laborales y de otra índole.

101. Así las cosas, retomando el Diagnóstico de Supervisión Penitenciaria 2019 y 2020, elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, este Organismo Local concluye que, persiste la problemática de falta de personal de seguridad y custodia, al interior del Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo, Zacatecas, detectado por el Organismo Nacional en dicho informe. Circunstancia que, infortunadamente, repercute en una deficiente vigilancia de todas las áreas que integran la infraestructura del establecimiento y, por ende, impacta en el control eficaz que debe prevalecer, con respecto a las condiciones de seguridad, no solo de los internos, sino del propio personal adscrito al centro, y desde luego, de las personas que visitan a los internos, tal y como lo ha comprobado esta Institución, en las Recomendaciones emitidas en los últimos años, que tuvieron como origen, la muerte de una o más personas privadas de su libertad en hechos violentos suscitados al interior de los centros penitenciarios de esta Entidad Federativa.

102. En caso concreto, es posible establecer que, pese a que en fecha 29 de febrero de 2020, el área de separos del Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo, Zacatecas, se encontraba a cargo de un elemento de seguridad y custodia, éste se encontraba al cuidado de 24 internos, viéndose superado en número y, como ya se dijo, en riesgo su integridad, debido a la peligrosidad de dichos internos quienes en días anteriores, según el propio **PPO27**, participaron en un motín; asimismo, es factible afirmar que, a pesar de que en el área existe una cámara de vigilancia, en fecha 29 de febrero de 2020, ninguna persona estaba a cargo de su monitoreo. Lo que implica una deficiente vigilancia tanto remota, como por contacto directo, falta de vigilancia que contribuyó a que **VD†**, perdiera la vida en circunstancias que no fue posible establecer con claridad y que hasta ahora se desconocen, mientras se encontraba bajo la custodia del Estado. Por lo tanto, este Organismo concluye que, de haber existido una vigilancia efectiva, ya sea a través de cámaras de seguridad o con la intervención directa del personal operativo, seguramente habría sido posible tomar medidas efectivas e inmediatas, para salvaguardar su vida e integridad.

103. De lo anterior, resulta imperativo que tanto la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, como la Fiscalía General de Justicia del Estado, investiguen a fondo los hechos, de manera imparcial y objetiva, con la finalidad de esclarecer los hechos en que **VD†** perdió la vida. Además de ello, este Organismo reitera la importancia de contratación de personal penitenciario suficiente en número y debidamente capacitado, para detentar la seguridad del Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo, Zacatecas, pues, en la medida en que eso suceda, se evitarán eventos como el que ahora nos ocupa, incluyendo las muertes violentas que han sido documentadas en otras Recomendaciones, ya citadas con anterioridad, dentro de esta Recomendación.

104. De ahí la importancia de que se insista en la contratación de personal suficiente, que cumpla debidamente con las labores de vigilancia de todas las personas privadas de su libertad, como medida de mitigación de la carente infraestructura del Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo, Zacatecas. Pues además, debe tomarse en consideración que, si bien con

el creciente aumento de la tecnología, la cámara de observación se ha convertido en una alternativa popular para la observación directa por parte del personal penitenciario, los puntos ciegos de la cámara, aunados a la falta de supervisión efectiva de los monitores, por razones que, incluso ya han sido evidenciadas en esta Recomendación, trágicamente, se ha manifestado muertes de internos que ocurren a plena vista del equipo de la cámara.

105. Con base en los argumentos hasta aquí esgrimidos, este Organismo considera de elemental importancia que, por parte de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social del Estado de Zacatecas, se prevea la gestión de mecanismos de seguridad física y procedimental como aspectos fundamentales de cualquier establecimiento penitenciario. Asimismo, debe considerarse que la seguridad también depende de un grupo del personal que esté alerta y que interactúe y conozca a sus reclusos, que desarrolle relaciones positivas con éstos y que sea consciente de lo que ocurre en el establecimiento penitenciario. Donde haya un trato justo y un sentido de "bienestar" entre los reclusos y el personal se asegure de que los reclusos se mantengan ocupados en actividades constructivas y productivas que contribuyan a su futura reinserción social. Este concepto se describe frecuentemente como seguridad dinámica y es cada vez más adoptado de manera global.[74]

106. *"El concepto de la seguridad dinámica implica que el personal penitenciario subalterno debe que estar capacitado y motivado para desarrollar buenas relaciones personales con los reclusos, para entenderlos y comprenderlos como individuos, para ofrecerles ayuda en sus problemas personales con empatía y para involucrarse con ellos mediante un diálogo con un sentido particular"*.[75] Lo anterior, debido a que los internos tienen mayor contacto y con mayor frecuencia con el personal subalterno, debido a la naturaleza propia de las interacciones diarias, por lo que, si dichas interacciones son positivas, tenderán a reducir actitudes y conductas destructivas de los internos y favorecerán el trabajo constructivo, con miras a una verdadera reinserción social. Aunado a ello, la seguridad dinámica permite que el personal se dé cuenta con mayor facilidad de las conductas alarmantes por parte de un recluso, como tentativas de fuga, episodios de violencia entre reclusos o contra el personal, el contrabando de artículos prohibidos, etcétera. Puesto que, *"la seguridad dinámica (…) ofrece la posibilidad de proporcionar información de advertencia antes de que se produzcan ciertos incidentes no deseados y permite que el personal penitenciario tome medidas preventivas para desalentar que se produzcan potenciales incidentes peligrosos".* [76]

107. Este enfoque hacia la seguridad pública (prevención de fugas) y la seguridad en el establecimiento penitenciario (orden interno) reconoce que ambos son posibles solamente a través de la relación entre el personal y los reclusos. La seguridad dinámica implica el conocimiento de lo que ocurre en el establecimiento penitenciario, además de ofrecer un contexto de seguridad y protección con relación a todas las actividades que se llevan a cabo en el establecimiento penitenciario. El concepto de seguridad dinámica cuenta con el beneficio de abordar a los reclusos de forma individual, obteniendo perspectivas materiales e intuitivas de la gestión del establecimiento. El concepto de seguridad dinámica se basa en los siguientes elementos:

- Relaciones positivas, comunicación e interacción entre el personal y los reclusos.
- Profesionalismo.
- Recolección de información relevante.
- Observación y mejora del clima social en la institución penal.
- Firmeza y ecuanimidad.
- Comprensión de la situación personal del recluso.
- Comunicación, relaciones positivas e intercambio de información entre todos los empleados.[77]

108. Luego entonces, partiendo de la premisa de que los sistemas penitenciarios deberían garantizar la implementación de relaciones efectivas entre el personal y los reclusos, a través de la selección de personal y la capacitación, se deduce que, la seguridad dinámica, resulta ser más efectiva cuando existe un grupo profesional, correctamente capacitado. Motivo por el cual,

---

[74] Ídem.
[75] Ídem.
[76] Ídem.
[77] Ídem.

el personal debe ser seleccionado y capacitado especialmente para trabajar con reclusos, dada la importancia de construir y mantener relaciones con éstos, la apropiada capacitación, debería estar reflejada y fomentada a través de la forma en que el personal penitenciario es evaluado, capacitado y seleccionado. Por todo ello, debe implementarse, de manera paulatina, el desarrollo de políticas y procedimientos apropiados que impacten de forma positiva en una contratación efectiva de personal, selección y capacitación por parte de la gestión del sistema penitenciario.[78]

109. Bajo ese entendido, este Organismo Local confirma una vez más, la insuficiencia de personal penitenciario y con ello, del control efectivo de las diversas áreas en que se ha dividido el Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo, Zacatecas. En el caso concreto, se acreditan dichas deficiencias, en los separos y una vez más, en el monitoreo de las cámaras de vigilancia, ubicadas en el centro; así como en la insuficiencia de éstas en las diversas zonas en que se ha dividido en establecimiento penitenciario. Lo cual, pone en evidencia de nueva cuenta, las nulas acciones implementadas por la Dirección General de Prevención y Reinserción Social del Estado de Zacatecas, para prevenir actos que, por acción o por omisión, culminen con la pérdida de vidas humanas al interior de los centros penitenciarios a su cargo; pese a que este Organismo Autónomo, ha emitido en los últimos años Recomendaciones derivadas de actos como el que ahora nos ocupa.

110. La falta de control efectivo del Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo, Zacatecas, indica que la seguridad a su interior es inconsistente y que se incumple repetidamente la obligación del Estado garante de salvaguardar la vida, seguridad e integridad de los reclusos, de visitantes, e incluso del personal que ahí labora. Dicha omisión, infringe la Regla número 1, de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas, para el Tratamiento de los Reclusos, (Reglas Mandela), que aprobó el Consejo Económico y Social Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal, en el 24 periodo de sesiones, (Viena 18 a 22 de mayo de 2015), y que indica como imperativo improrrogable que, en los centros penitenciarios, se vele en todo momento, por la seguridad de los reclusos, del personal que ahí labore, de todos los proveedores de servicios y de los visitantes que acudan.

111. Luego entonces, con base en los razonamientos vertidos en los párrafos precedentes, este Organismo Estatal logró acreditar, una vez más, que la Dirección de Prevención y Reinserción Social del Estado de Zacatecas, por conducto del personal del Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo, Zacatecas, omitió garantizar el derecho a la integridad y a la vida de **VD†**, incumpliendo así con su deber de Estado como garante de los derechos fundamentales de las personas privadas de su libertad, primordialmente del derecho a la vida e integridad. Omisión que es ocasionada por la falta de contratación de personal suficiente, que cubra todas las áreas del centro, ocasionando con ello una deficiencia en las labores de vigilancia y seguridad; lo que conlleva la vulnerabilidad de los internos, al no contar con las debidas garantías para la protección de sus derechos humanos, principalmente su derecho a la vida y a la integridad.

112. Consecuentemente, este Organismo Constitucional Autónomo, resuelve que, las evidencias que se han concatenado a lo largo del presente documento, son de provecho para afirmar que al interior del Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo, Zacatecas, no se cuenta con el personal suficiente que pueda detentar el control de éste, a pesar de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a través de los Diagnósticos de Supervisión Penitenciaria cuyos resultados ya se abordaron en párrafos antecedentes, ha visibilizado dicha problemática año con año. Así como, a pesar de que esta Institución ha emitido Recomendaciones al respecto, no se han implementado las acciones necesarias para garantizar seguridad a los internos, de los visitantes y del propio personal que ahí labora; o bien, éstas han sido insuficientes, pues persisten los actos violentos como el que da origen a la presente Recomendación, y con ello la omisión de su obligación de Estado, como garante de los derechos humanos.

113. Omisión que, en el caso concreto, se actualizó en agravio de **VD†**, pues el hecho de que perdiera la vida, mientras se encontraba bajo la custodia del Estado, contraviene el deber de custodia. Deber que, según el **DR. SERGIO GARCÍA RAMÍREZ:** "*puede comprender diversas*

[78] Ídem.

conductas, tanto activas como omisivas, que conducen a vulnerar bienes jurídicos y derechos contenidos en la Convención Americana de Derechos Humanos"[79]*.*

114. Por último, esta Comisión se pronuncia en cuanto a la obligación interna que debe sobrevenir, cuando el Estado se encuentra ante hechos en que pierde la vida una persona, máxime si dicha muerte, aconteció, como en la especie, bajo su control y custodia; por lo tanto, es deber indubitable de las autoridades penitenciarias, que se investigue lo conducente, para que se deslinde la responsabilidad administrativa propia del personal Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo, Zacatecas. Por lo que, en el ámbito de su competencia, la Dirección General de Prevención y Reinserción Social del Estado de Zacatecas, deberá iniciar una investigación, efectiva, profunda e imparcial, de los actores que debieron intervenir y no lo hicieron; así como de las deficiencias sistémicas que crean los factores de riesgo para toda la población penitenciaria, y detonan en hechos lamentables, como el que es motivo de la presente Recomendación, así como colaborar en la investigación incoada por la Representación Social, dentro de la carpeta de investigación [...].

115. En lo concerniente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha sostenido que la determinación de responsabilidad penal o administrativa poseen, cada una, sus propias reglas sustantivas y procesales. Y que la falta de determinación de responsabilidad penal, en su caso, no debe impedir que se continúe con la averiguación de otros tipos de responsabilidades, tales como la administrativa[80]. Consecuentemente, debe cumplirse con la obligación que impone el artículo 1°, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se señala de manera contundente de todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, deben *de "promover, respetar, proteger y garantizar" los derechos humanos, de conformidad con los principios de "universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad",* y se establece la obligación del Estado de *"prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos".*

116. Lo anterior, implica que, todos los órganos del Estado, en el marco de las atribuciones que le son conferidas por la ley, están obligados a implementar programas encaminadas a prevenir violaciones a los derechos humanos y garantizar que sean efectivamente respetados. En el caso que nos ocupa, **VD†** perdió la vida encontrándose bajo la custodia del Estado, producto de la insuficiencia o incapacidad del personal de seguridad y custodia del Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo, Zacatecas. Asimismo, dicha pérdida humana fue consecuencia de la falta de cámaras de vigilancia colocadas en todas y cada una de las áreas de dicho centro y, por ende, de personal encargado de su efectivo monitoreo. Por ello, es impostergable la investigación administrativa interna, que tienda a esclarecer la verdad de los hechos, a fin de determinar las condiciones en las cuales **VD†** perdió la vida; y, en su caso sancionar el hecho concreto. Asimismo, es imperativo que se esclarezcan de manera precisa, las necesidades del centro de reclusión que propician o facilitan las condiciones de autogobierno o cogobierno, así como los servidores públicos que, al respecto, han sido omisos, para proceder contra ellos administrativa y, en su caso, penalmente.

117. Por lo tanto, con base en los argumentos y razonamientos vertidos a lo largo de la presente Recomendación, esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, tiene debidamente demostrado que, existió omisión en la seguridad y custodia del Centro de Observación y Clasificación, del Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo, Zacatecas, en fecha 29 de febrero de 2020. Lo que trajo como consecuencia que **VD†**, persona privada de su libertad en dicho centro penitenciario, perdiera la vida, contraviniéndose así, lo mandatado en los instrumentos internacionales, interamericanos e internos, que han sido invocados a lo largo de la presente Recomendación. Y que se relacionan con el deber del Estado Mexicano, como garante de los derechos de sus gobernados y, en el caso particular, de las personas privadas de su libertad.

118. Motivo por el cual, el Ministerio Público deberá agotar todas las líneas de investigación dentro de la carpeta de investigación a su cargo, a efecto de que, en caso de existir un

---

[79] Voto razonado concurrente del Juez Sergio García Ramírez, a la Sentencia Dictada por la Corte IDH, en el Caso Bulacio Vs. Argentina del 18 de septiembre del 2003. Párr. 8.
[80] Corte IDH, *Caso Mendoza y otros* vs. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones. Sentencia de 14 de mayo de 2013. Párr. 224.

probable responsable de la muerte de **VD†**, éste sea procesado y, en su caso, sancionado penalmente por el órgano jurisdiccional correspondiente. Lo anterior, en virtud de que la investigación y sanción de los responsables, es parte fundamental del derecho de acceso a la justicia de las víctimas indirectas en los casos de violaciones a derechos humanos, en la especie de: **VI1**, **VI2**, **VI3, VI4, M1, M2** y **VI5,** según se describe en el apartado siguiente.

VII. DE LAS VÍCTIMAS INDIRECTAS.

El artículo 4°, párrafo segundo, de la Ley de Víctimas del Estado de Zacatecas, establece que, cuando como consecuencia de la comisión de un delito o de violaciones a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, se reconozca una víctima directa, se considerará así a los familiares o aquellas personas físicas a cargo de la víctima directa, que tengan una relación inmediata con ella; en ese entendido, considera como tal, al cónyuge, la concubina o el concubinario, las hijas e hijos de la víctima, los padres y los dependientes económicos de la víctima.

En el presente caso, esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas logró acreditar que **VD†** era hijo de los **CC. VI1** y **VI2**.

De la misma manera, este Organismo acreditó el vínculo entre **VD†** y los **CC. VI3, VI4, M1** y **M2,** quienes eran sus hermanos.

Igualmente, esta Comisión confirmó el vínculo entre **VD†** y la **C. VI5**, con quien vivía en concubinato.

VIII. CONCLUSIONES DEL CASO.

1. Esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, reprueba la vulneración del derecho a la integridad personal y a la vida, en relación con el deber del Estado garante, respecto a la muerte de **VD†**, lo cual, es atribuible a la omisión del personal de seguridad y custodia, del Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo, Zacatecas, durante la guardia comprendida de las **8:30 a las 19:30 horas del día 29 de febrero de 2020**, bajo la dirección del **DCPF1**, entonces Director del Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo, Zacatecas.

2. Y de manera indirecta, a la Dirección de Prevención y Reinserción Social del Estado de Zacatecas, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública, en virtud de omitir la contratación de personal de seguridad y custodia, necesario para cubrir adecuadamente las guardias de 24 horas, en las diversas áreas del Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo, Zacatecas, así como la colocación de cámaras de vigilancia en todas los zonas del centro que así lo requieren; aunado al hecho de no tomar las medidas necesarias para abatir las condiciones de sobrepoblación y hacinamiento, que persisten en algunas de esas zonas, como en el caso se comprobó, en el área de separos del establecimiento penitenciario.

3. De ahí que, para este Organismo, resultó indefectible establecer, la responsabilidad por omisión, atribuible al personal de seguridad y custodia que se encontraba de turno, en el horario y día en que se suscitaron los hechos. Y que, de acuerdo al informe rendido por el **DCPF1**, otrora Director del Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo, Zacatecas, así como a las propias declaraciones de los elementos de seguridad y custodia, que rindieron testimonio ante este Organismo y ante la Representación Social, recae en la guardia comprendida entre las **08:30 y las 19:30 horas del día 29 de febrero de 2020.**

IX. REPARACIONES.

1. De conformidad con lo establecido en los artículos 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 51 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, al acreditarse violación a los derechos humanos de **VD†**, atribuible a servidores públicos estatales de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social del Estado, dependientes de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de

Zacatecas, la Recomendación formulada al respecto, debe incluir las medidas que procedan para lograr la efectiva restitución de las personas afectadas en sus derechos.

2. Dicha reparación, de conformidad con los Principios y Directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones", adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 2005, las violaciones de derechos humanos deben contemplar, de forma apropiada y proporcional a la gravedad de ésta, una reparación plena y efectiva en las formas siguientes:, restitución, rehabilitación, satisfacción, indemnización, deber de investigar y garantías de no repetición. En el caso en concreto y ante la pérdida fatal, no es posible solicitar la restitución de los derechos humanos conculcados. Las reparaciones se contemplan también en la Ley General de Víctimas, en sus artículos 1, último párrafo, 7, fracción I y II, y particularmente en el texto legal del artículo 26, que establece que "Las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera oportuna, plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva por el daño que han sufrido como consecuencia del delito o hecho victimizante que las ha afectado o de las violaciones de derechos humanos que han sufrido, comprendiendo medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y medidas de no repetición", además por lo previsto en el artículo 27 del mismo ordenamiento legal.

3. La Corte ha señalado que los familiares de las víctimas de violaciones de derechos humanos pueden ser, a su vez, víctimas. Ha considerado violado el derecho a la integridad psíquica y moral de los familiares de las víctimas por el sufrimiento causado por las violaciones perpetradas contra sus seres queridos y las posteriores actuaciones u omisiones de las autoridades estatales, por ello, es de vital importancia que las víctimas reciban la valoración médica y psicológica necesaria para determinar los daños que sufrieron como consecuencia de la vulneración a sus derechos, a través de la vulneración de los derechos de su ser querido, en este caso, a favor de los **CC. VI1** y **VI2** en su calidad de padres; de los **CC. VI3 , VI4 , M1** y **M2**, en su calidad de hermanos y de la **C. VI5** en su calidad de concubina, según lo acreditó esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas.

A) De la indemnización.

1. La indemnización ha de concederse, de forma apropiada y proporcional a la gravedad de la violación y a las circunstancias de cada caso, por todos los perjuicios económicamente evaluables que sean consecuencia de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos o de violaciones graves del derecho internacional humanitario, tales como los siguientes:

a) El daño físico o mental;
b) La pérdida de oportunidades, en particular las de empleo, educación y prestaciones sociales;
c) Los daños materiales y la pérdida de ingresos, incluido el lucro cesante;
d) Los perjuicios morales;
e) Los gastos de asistencia jurídica o de expertos, medicamentos y servicios médicos y servicios psicológicos y sociales.[81]

2. En el presente punto, debido al fallecimiento de **VD†**, la indemnización deberá realizarse a favor de las víctimas indirectas, que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 4 fracción I y II, de la Ley de Atención a Víctimas del Estado de Zacatecas, son los **CC. VI1** y **VI2** en su calidad de padres; los **CC. VI3, VI4, M1** y **M2**, en su calidad de hermanos y la **C. VI5** en su calidad de concubina; para que, en su caso, sean beneficiarios del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, para que sea cuantificado lo previsto en los incisos d) y e), relativos a los perjuicios morales, los gastos de asistencia jurídica y servicios psicológicos requeridos para la aceptación de la pérdida.

B) De la rehabilitación.

[81] Ídem, párr. 20.

1. Las medidas de rehabilitación buscan reducir los padecimientos físicos y psicológicos de las víctimas, a través del otorgamiento de servicios de atención médica, psicológica, jurídica y social que éstas requieran[82].

2. En atención a que, en el caso en concreto se advierte que los familiares estuvieron expuestos a un evento emocional traumático, por lo que no se descarta un daño psicológico producto de los hechos de la indebida actuación de los servidores públicos involucrados, en consecuencia, se considera necesario se brinde atención psicológica especializada en tanatología a las siguientes personas: **CC. VI1** y **VI2** en su calidad de padres; los **CC. VI3, VI4, M1** y **M2**, en su calidad de hermanos y la **C. VI5** en su calidad de concubina, para enfrentar consecuencias psíquicas que pudiera tener, a raíz del fallecimiento de **VD†**.

C) De las medidas de satisfacción.
1. La satisfacción cuando sea pertinente y procedente deberá incluir la totalidad o parte de las medidas siguientes:

a) Medidas eficaces para conseguir que no continúen las violaciones;
b) La verificación de los hechos y la revelación pública y completa de la verdad, en la medida en que esa revelación no provoque más daños o amenace la seguridad y los intereses de la víctima, de sus familiares, de los testigos o de personas que han intervenido para ayudar a la víctima o impedir que se produzcan nuevas violaciones;
c) La búsqueda de las personas desaparecidas, de las identidades de los niños secuestrados y de los cadáveres de las personas asesinadas, y la ayuda para recuperarlos, identificarlos y volver a inhumarlos según el deseo explícito o presunto de la víctima o las prácticas culturales de su familia y comunidad;
d) Una declaración oficial o decisión judicial que restablezca la dignidad, la reputación y los derechos de la víctima y de las personas estrechamente vinculadas a ella;
e) Una disculpa pública que incluya el reconocimiento de los hechos y la aceptación de responsabilidades;
f) **La aplicación de sanciones judiciales o administrativas a los responsables de las violaciones**;
g) Conmemoraciones y homenajes a las víctimas;
h) **La inclusión de una exposición precisa de las violaciones ocurridas en la enseñanza de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, así como en el material didáctico a todos los niveles**.[83]

2. En relación a la presente reparación, este Organismo considera que son apropiadas las medidas señaladas en los incisos a), f) y h); es decir, como medidas eficaces para conseguir que no se repitan violaciones al derecho a la integridad personal y a la vida, en relación con el deber del estado garante de las personas privadas de su libertad, deberá capacitarse al personal de seguridad y custodia del Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo, Zacatecas, para que sujete su actuar a los dispuesto por los instrumentos jurídicos universales e interamericanos, en los criterios asumidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los emitidos por esta Comisión, los cuales han sido retomados el presente instrumento recomendatorio, así como a los protocolos establecidos en la Ley Nacional de Ejecución Penal, que permitan cumplir con su obligación reforzada en la protección del derecho a la vida e integridad de las personas internas, realizando rondines con mayor frecuencia, en la medida de detectar y evitar eventos en los que se pierdan vidas humanas, como en el caso ocurrió con **VD†**.

3. Asimismo, este Organismo considera procedente que, el Órgano Interno de Control o a la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas, inicie los procedimientos administrativos en contra de **PP2, PP3, PP4, PP5, PP6, PP7, PP8, PP9, PP10, PP11, PP12, PP13, PP1, PP14, PP15, PP16, PP17, PP18, PP19** y **PP21**, personal penitenciario que, en fecha 29 de febrero de 2020, se encontraba de guardia, en el lapso en que perdió la vida **VD†** y, por ende, incurrieron en violaciones al derecho a la integridad y a la vida en relación con el deber del Estado garante de las personas privadas de su libertad.

---

[82] Ibid., Numeral 21.
[83] Ídem, párr. 22.

D) De las garantías de no repetición.
1. Las garantías de no repetición, son aquellas que se adaptan con el fin de evitar que las víctimas vuelvan a hacer objeto de violaciones a sus derechos humanos y, toda vez que los Derechos Humanos son universales, contribuyen a prevenir o evitar la repetición de actos de su misma naturaleza.

2. A fin de prevenir la violación de los derechos mencionados en párrafos precedentes, resulta indispensable que el Centro de Regional de Reinserción Social de Fresnillo, Zacatecas, realicen los trámites correspondientes ante las instancias respectivas, a efecto de obtener y contar con los recursos mínimos indispensables, suficientes y eficaces, para el debido funcionamiento del Sistema Penitenciario, como son: personal técnico, administrativo, profesional y penitenciario suficiente para cubrir todos los servicios y horarios; y con ello, cumplir con su obligación de Estado garante de la integridad física y la vida de los internos que están bajo su custodia.

3. De la misma manera, se hace necesario que se instalen cámaras de videovigilancia en todas las áreas del Centro Regional de Reinserción Social del Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo, Zacatecas, las cuales deberán ser automáticas, modernas, funcionales, de clara resolución y con suficiente capacidad de almacenamiento que permita conservar hasta por 2 años las grabaciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 159 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas[84].

4. Finalmente, este Organismo considera indispensable la educación en materia de respeto, protección y garantía de los derechos humanos por parte de los servidores públicos involucrados, específicamente del derecho a la integridad personal y a la vida, en relación con el deber del Estado garante de las personas privadas de su libertad, por lo que, para ello, es obligación de dichos funcionarios, la observancia, por lo menos, de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos de 1955 (Reglas Nelson Mandela), el Conjunto de Principios para la Protección de todas las Personas Sometidas a Cualquier forma de Detención o Prisión de 1988, los Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos de 1990, la Declaración de Arusha sobre Buenas Prácticas Penitenciarias; así como de los Protocolos establecidos en la Ley Nacional de Ejecución Penal.

X. RECOMENDACIONES.

Por todo lo anteriormente expuesto, y con fundamento en los 1 y 102 apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 2, 3, 4, 8, 17, 37, 51, 53, 54, 56, 57 y 58 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas se emiten las siguientes Recomendaciones:

PRIMERA. En el plazo máximo de un mes, contado a partir de la notificación de la presente Recomendación, se inscriba en el Registro Estatal de Víctimas a **VD†**, en calidad de víctima directa de violaciones a derechos humanos, así como a los **CC. VI1** y **VI2** en su calidad de padres; de los **CC. VI3, VI4, M1** y **M2**, en su calidad de hermanos y de la **C. VI5** en su calidad de concubina, en calidad de víctimas indirectas, para que dentro del plazo máximo de un año, contado a partir de la notificación de la presente Recomendación, se garantice su acceso oportuno al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, previsto en la Ley de Atención a Víctimas del Estado de Zacatecas, a efecto de que se realice la indemnización correspondiente; debiendo remitir a este Organismo protector de Derechos Humanos, las constancias con que acredite su cumplimiento.

SEGUNDA. En el plazo máximo de un mes, contado a partir de la notificación de esta Recomendación, se valore y determine proporcionar a las víctimas indirectas **CC. VI1** y **VI2** en

---

[84] Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, que dispone: art. 159. Todo establecimiento, instalación o cualquier sitio en control de las autoridades federales, estatales o municipales en donde pudieran encontrarse personas en privación de la libertad, deberá contar con cámaras de video que permitan registrar los accesos y salidas del lugar. Las grabaciones deberán almacenarse de forma segura por dos años.

su calidad de padres; de los **CC. VI3, VI4, M1** y **M2**, en su calidad de hermanos y de la **C. VI5** en su calidad de concubina, la atención psicológica y tanatológica necesaria, y de ser el caso, se les otorgue la terapia que requieran, derivado del evento relacionado con la pérdida de la vida de **VD†.** Debiendo garantizar que dichas atenciones sean gratuitas. Asimismo, se deberán remitir a este Organismo las constancias que acrediten su cumplimiento.

TERCERA. En un plazo máximo de un mes, contado a partir de la aceptación de la presente Recomendación, se incremente el personal de seguridad y custodia del Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo, Zacatecas, concretamente del área de separos y de monitoreo del circuito cerrado de videovigilancia, para que se garantice la protección y seguridad de los internos de dicho centro penitenciario, debiendo enviarse a este Organismo, las constancias de cumplimiento.

CUARTA. En un plazo máximo de un mes, contado a partir de la aceptación de la presente Recomendación, se realicen las gestiones necesarias ante el área correspondiente, a fin de que se dote de los dispositivos necesarios de videograbación, que cubran todas las áreas del Centro Regional de Reinserción Social del Estado de Zacatecas, con el objetivo de impactar de manera adecuada, en la vigilancia de los internos, debiendo enviarse a este Organismo, las constancias de cumplimiento.

QUINTA. En un plazo máximo de un mes, contado a partir de la aceptación de la presente Recomendación, se acredite la capacitación del personal de seguridad y custodia y de la Policía Penitenciaria, adscritos al Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo, Zacatecas, a fin de que realicen de manera eficaz la vigilancia, cuidado y atención de las personas privadas de su libertad, salvaguardando ante todo, el respeto, protección y garantía de los derechos humanos de éstos, en específico su derecho a la integridad personal y a la vida, en relación con el deber del Estado garante de las personas privadas de su libertad; haciéndose énfasis en el carácter social de la función que desempeñan, así como en el concepto de seguridad dinámica, debiendo enviarse a este Organismo, las constancias de cumplimiento.

SEXTA. En un plazo máximo de dos meses, contados a partir de la aceptación de la presente Recomendación, se realicen acciones tendentes a abatir la sobrepoblación y el hacinamiento detectado en el área de separos del Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo, Zacatecas; además, se deberá entregar a cada elemento de seguridad asignado al área, el listado de internos que habitan ésta, a efecto de identificarlos y poder informar sobre su comportamiento a las propias autoridades del centro o, cuando el caso lo requiera, a la Representación Social, debiendo enviarse a este Organismo, las constancias de cumplimiento.

SÉPTIMA. En un plazo máximo de un mes, contados a partir de la aceptación de la presente Recomendación, se inicien los procedimientos de responsabilidad correspondientes, a fin de que las y los servidores públicos responsables de las violaciones a los derechos humanos señalados, sean debidamente sancionados debiendo enviarse a este Organismo, las constancias de cumplimiento.

OCTAVA. En un plazo máximo de dos meses, se implemente, por la Dirección del Centro Regional de Reinserción Social, un programa constante de supervisión interna, que tenga como finalidad garantizar la seguridad de los internos, de los visitantes y del personal que ahí labora, así como brindar los servicios indispensables para satisfacer las necesidades básicas de los internos, con énfasis en el concepto de seguridad dinámica, caracterizado por una estrecha interacción entre el personal, (que deberá estar debidamente capacitado), y los internos; la supervisión indirecta, o una combinación de ambas modalidades, procurando en consecuencia que, el personal, sea suficientemente numeroso y mantenga una proximidad suficiente para garantizar la seguridad de todos los detenidos presentes en el área de alojamiento de que se trate, durante las 24 horas del día debiendo enviarse a este Organismo, las constancias de cumplimiento.

NOVENA. En un plazo máximo de seis meses, contados a partir de la presente Recomendación, se realicen los trámites correspondientes, ante las instancias competentes, a efecto de contar con el personal técnico, administrativo y profesional mínimo indispensable, para garantizar de manera eficiente y eficaz, el funcionamiento de las diferentes áreas del

Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo, Zacatecas. Así como, con el óptimo funcionamiento de las cámaras de videovigilancia existentes, incrementando el número de éstas, en las áreas que ameritan mayor monitoreo dentro del centro penitenciario, procurando además su constante vigilancia, sin que la persona asignada a ello se ocupe de otras tareas durante su encargo, debiendo enviarse a este Organismo, las constancias de cumplimiento.

DÉCIMA. Se ordena remitir copia de la presente Recomendación a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, el Agente del Ministerio Público a cargo de la investigación penal, agote todas las líneas de investigación tendentes al esclarecimiento de los hechos, poniendo especial atención en el contenido de los videos de vigilancia del área de separos del Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo, Zacatecas, los cuales, como se evidenció en líneas anteriores, no han sido recopilados en la indagatoria.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 53, párrafo segundo de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, se hace del conocimiento de la autoridad a la que va dirigida esta Recomendación, que dispone de un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente en que ésta se le notifique, para que manifieste si la acepta o no, en el entendido de que, de no aceptarla, su respuesta se hará del conocimiento de la opinión pública. En caso de que la acepte, se le notifica que dispone de un plazo de 15 días, contados a partir del vencimiento del término del que disponía para responder sobre la aceptación, a fin de enviar las pruebas de su cumplimiento.

Así lo determina y firma

DRA. EN D. MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOS
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE ZACATECAS

Expediente: CDHEZ/237/2018.

Persona quejosa: C. Q1.

Personas agraviadas: C. A1(†), A2, A3, A4, Q1, M1, M2, A5 y A6.

Autoridades responsables:

I. Elementos de la Policía Estatal Preventiva de la Secretaría de Seguridad Pública.

Derechos humanos vulnerados:

I. Derecho a la legalidad y seguridad jurídica en relación con la vida privada en su modalidad de inviolabilidad del domicilio;
II. Derecho a la legalidad y seguridad jurídica en relación con el derecho a no ser objeto de detenciones ilegales;
III. Desaparición forzada transitoria, en relación con el derecho a no ser víctima de desaparición forzada de personas;
IV. Derecho a la integridad y seguridad personal, en relación con el derecho a la integridad física y a la vida, en relación con la desaparición forzada de personas y,
V. Derecho de las víctimas indirectas de desaparición forzada de persona, en relación al derecho de acceso a la justicia y a la verdad.

Zacatecas, Zac., a 30 de diciembre de 2021, una vez concluida la investigación de los hechos que motivaron el expediente de queja CDHEZ/237/2018 y analizado el proyecto presentado por la Tercera Visitaduría, la suscrita aprobé, de conformidad con los artículos 4, 8 fracción VIII, 17 fracción V, 37, 51, 53 y 56 de la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, en relación con lo dispuesto por los numerales 27, fracción VIII, 40, 161, fracción X, 166, 167, 168, 169, 170, 171 y 173, del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, la **Recomendación 60/2021** que se dirige a la autoridad siguiente:

1. GENERAL DE BRIGADA DEL ESTADO MAYOR EN RETIRO, ADOLFO MARÍN MARÍN, Secretario de Seguridad Pública del Estado, por la participación de elementos de la Policía Estatal Preventiva, en las siguientes violaciones a derechos humanos: 1. Violación al derecho a la legalidad y seguridad jurídica en relación con la vida privada de las personas en su modalidad de inviolabilidad del domicilio de los CC. A1(†), A2, A3, A4, Q1, A5y A6, así como de M1 y M2; 2. Violación al derecho de no ser víctima de desaparición forzada transitorio en perjuicio de A1(†), y, 3. Violación al derecho a la integridad y seguridad personal, en relación con el derecho a la integridad física y a la vida, esto en relación con el derecho a no ser víctima de desaparición forzada de personas en perjuicio de A1(†).

2. DR. FRANCISCO JOSÉ MURILLO RUISECO, Fiscal General de justicia del Estado de Zacatecas, por la violación al derecho de las víctimas indirectas CC. A2, A3, A4, Q1, A5y A6, así como de M1 y M2; de desaparición forzada transitorio de A1(†), en relación al derecho de acceso a la justicia y a la verdad.

RESULTANDO:

I. DE LA CONFIDENCIALIDAD

1. De conformidad con los artículos 6°, apartado A, fracción II y 16, apartado A, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 23 y 85 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, los datos personales de los peticionarios y los agraviados que así lo soliciten, relacionadas con esta resolución, permanecerán confidenciales, ya que éstos no son públicos.

2. Asimismo, en términos de lo dispuesto por los artículos 4º, párrafo noveno, 6º, inciso A, fracción II y 16, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 32 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del estado de Zacatecas, los numerales 76, 77 y 79 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y los artículos 23 y 85 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, los datos personales de los menores, relacionados con esta resolución, permanecerán confidenciales, ya que sus datos personales, así como aquellos relativos a su vida privada y familia, no tienen el carácter de públicos.

II. RELATORÍA DE LOS HECHOS Y OBJETO DE LA CONTROVERSIA.

1. El 06 de junio de 2018, el **C. Q1** presentó, de conformidad con los artículos 30, 31, y 32 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, formal queja en contra de elementos de la Policía Estatal Preventiva, de la Secretaría de Seguridad Pública.

Por razón de turno, el 06 de junio de 2018, se remitió la queja a la Tercera Visitaduría, bajo el número de expediente citado al rubro, a efecto de formular el acuerdo de calificación de ésta, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 123 y 124 del Reglamento de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas.

El 06 de junio de 2018, la queja se calificó como presunta violación a los derechos humanos de los **CC. Q1, A2** e **A1†**, de conformidad con lo establecido en el artículo 56 fracción I, del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas.

2. Los hechos materia de la queja consistieron en lo siguiente:
El 5 de junio de 2018, entre las 5:00 y 5:30 horas, personas cubiertas del rostro, ingresan al domicilio de los **CC. Q1** e **A2** golpearon y ataron a los miembros de la familia, se apoderaron de dinero en efectivo y celulares, y se llevaron consigo al **C. A1†**, quien posteriormente fue encontrado sin vida. Los quejosos atribuyen estos hechos a elementos de la Policía Estatal Preventiva de la Secretaría de Seguridad Pública.

3. El 08 de junio de 2018, el **LIC. JORGE EDUARDO CANO ALTAMIRANO** en calidad de Subsecretario de Inteligencia, Política Criminal y Vinculación Ciudadana de la Secretaría de Seguridad Pública, presentó el informe de autoridad correspondiente.

III. COMPETENCIA.

1. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas es competente, en los términos de los artículos 1º, 4º, 6º, 8º fracción VII, inciso A) y 31 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, en relación con los numerales 15, 16 y 17 de su Reglamento Interno, debido a que la queja se promueve en contra de funcionarios adscritos a la Policía Estatal Preventiva de la Secretaría de Seguridad Pública, y que de la investigación de los hechos resultara también responsable la Unidad de Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Fiscalía General de Justicia del Estado.
2. De conformidad con los artículos 56 fracción I y 57 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, este Organismo advierte que en los hechos

se puede presumir la violación de los derechos humanos de los **CC. A1†, A2, A3, A4, Q1, M1, M2, A5**y **A6** y, la probable responsabilidad de las autoridades señaladas.

3. Esta Comisión presumió la violación del siguiente derecho:
a) Derecho a la legalidad y seguridad jurídica en relación con la vida privada en su modalidad de inviolabilidad del domicilio;
b) Derecho a la legalidad y seguridad jurídica en relación con el derecho a no ser objeto de detenciones ilegales;
c) Desaparición forzada transitoria, en relación con el derecho a no ser víctima de desaparición forzada de personas;
d) Derecho a la integridad y seguridad personal, en relación con el derecho a la integridad física y a la vida, en relación con la desaparición forzada de personas y,
e) Derecho de las víctimas indirectas de desaparición forzada de personas, en relación al derecho de acceso a la justicia y a la verdad.

IV. PROCEDIMIENTO ANTE LA COMISIÓN.

Con la finalidad de documentar las presuntas violaciones a derechos humanos, así como para determinar la existencia o no de responsabilidad por parte de los servidores públicos señalados, este Organismo realizó entrevistas a las personas relacionadas con los hechos; se recabaron comparecencias de elementos de la Policía Estatal Preventiva, así como a personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado, se solicitaron informes a las autoridades señaladas como responsables así como informes en vía de colaboración, se consultaron notas periodísticas, se revisaron videograbaciones relacionadas con los hechos, se consultó la carpeta de investigación y causa penal relacionada con los hechos y se realizó investigación de campo.

V. PRUEBAS.

Con base en lo estipulado en los artículos 48 y 49 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, en relación con los numerales 64 y 65 del Reglamento Interior de este Organismo, durante el procedimiento realizado por esta Institución se recabaron los elementos probatorios documentales, remitidos tanto por la parte agraviada como por las autoridades señaladas como responsables, así como documentación, dictámenes e inspecciones que a continuación se detallan:

VI. CONSIDERACIONES PREVIAS.

1. Esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas considera que la prevención, investigación y persecución de delitos por parte de las autoridades, es compatible con el respeto a los derechos humanos, por lo que hace patente la necesidad de que el Estado, a través de sus instituciones públicas, cumpla con el deber jurídico de prevenir la comisión de conductas delictivas e investigar, con los medios a su alcance, los ilícitos que se cometen en el ámbito de su competencia.

2. De manera reiterada, este Organismo ha señalado que se debe investigar, procesar y, en su caso, sancionar, a aquellas personas que cometan faltas y delitos. Así, cualquier persona que cometa conductas delictivas debe ser sujeta a proceso, a fin de que sus actos sean investigados y, en su caso, sancionados. Todo ello siempre, en el marco del derecho y respeto a los derechos humanos. Las conductas desplegadas por los agentes aprehensores encaminadas a acreditar la responsabilidad de las personas inculpadas, también deben ser motivo de investigación y en su caso, de sanción, porque de no hacerlo, se contribuye a generar impunidad. Las víctimas del delito también deben tener protegidos sus derechos humanos de acceso a la justicia, entre otros, a partir de investigaciones ministeriales adecuadas y profesionales.

3. En este contexto, esta Comisión considera que la Seguridad Pública, así como las estrategias de inteligencia para perseguir las conductas criminales, deber totalmente compatibles con el respeto de los derechos humanos, y que las corporaciones policiacas de la Secretaría de Seguridad Pública, deben actuar con profesionalismo y conforme a las normas que los regulan bajo parámetros de racionalidad, objetividad y proporcionalidad, a fin de que se brinde a la ciudadanía, acceso a la justicia, contribuyendo así a impedir la impunidad, circunstancia que no los exime del respeto irrestricto a los derechos humanos.

4. Este Organismo estatal de Derechos Humanos sostiene, que toda conducta violatoria de derechos humanos, debe investigarse y sancionarse de manera proporcional a la conducta de los servidores públicos responsables, a las circunstancias en que ocurrieron los hechos violatorios y a la gravedad de estos. Nadie puede ni debe evadir la responsabilidad administrativa y penal cuando se acredite que cometió violaciones a derechos humanos. En ese sentido, tratándose de hechos en los que haya intervenido más de una persona servidora pública, se deberá investigar su grado de participación, para determinar el alcance de su autoría material e intelectual, así como la cadena de mando correspondiente.

5. Con fundamento en el artículo 49 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, se realizará un análisis de los hechos conforme a las evidencias que integran el expediente CDHEZ/237/2018, con un enfoque lógico-jurídico de máxima protección de la víctima, a la luz de los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, de los precedentes emitidos por el Organismo Nacional, los criterios jurisprudenciales aplicables tanto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como de la CrlDH, pues se acreditaron violaciones graves a derechos humanos de **A1†**, atribuibles a servidores públicos adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública.

6. Finalmente, se hace necesario precisar que, por técnica jurídica, en la presente Recomendación nos abocaremos, en un primer momento, al análisis del desistimiento de la parte quejosa y el motivo por el cual, esta Comisión se pronuncia de fondo en el caso, en atención a las violaciones graves a derechos humanos que se evidenciaron durante la investigación. Como violatorio de derechos humanos se analizará la afectación al derecho de inviolabilidad del domicilio, para continuar con el conocimiento de la privación ilegal de la libertad de **A1†**, a la que le siguió con su desaparición forzada, transitoria. Violación pluriofensiva, que conculcó su integridad personal, y concluyó con la pérdida de su vida. Para, posteriormente abordar con el derecho de las víctimas indirectas de desaparición forzada de personas.

VII. DE LA IMPROCEDENCIA DEL DESISTIMIENTO.

1. El artículo 77 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas vigente al momento de los hechos, establece que, los expedientes en trámite que son substanciados ante las Visitadurías de este Organismo, pueden terminar por las siguientes causas:

- Incompetencia de la Comisión para conocer de la queja presentada.
- Falta de materia, al no constituirse los hechos como violaciones a derechos humanos.
- Emisión de la Recomendación correspondiente.
- Falta de acreditación de la responsabilidad de las autoridades.
- **Desistimiento de la parte quejosa**.
- Falta de interés de la parte quejosa.
- Conciliación.

2. En relación con esta disposición, cuando en una queja substanciada ante esta Comisión, se reciba comunicación expresa del desistimiento de su promovente, se deberá concluir con la tramitación del expediente correspondiente y archivar el expediente como asunto

totalmente concluido. En este sentido, los **CC. Q1** e **A2,** manifestaron ante personal de este Organismo, mediante comparecencia de fecha 25 de febrero de 20020, su deseo de desistirse de la queja promovida ante este Organismo.

3. No obstante, de conformidad con el artículo 1°, el Estado Mexicano, tiene la obligación Constitucional consagrada en el citado artículo, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en el ámbito de sus competencias, las autoridades deben de "promover, respetar, proteger y garantizar" los derechos humanos, de conformidad con los principios de "universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad", y además se establece la obligación del Estado de "prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos". Esto conlleva que, esta Comisión no pueda sustraerse de la obligación de una vez detectadas las violaciones a derechos humanos que nos ocupa, velar porque las autoridades responsables, investiguen, sancionen y reparen estas violaciones. Esto es así, ya que, tanto por mandato constitucional, como por las obligaciones convencionales a que se está sujeto el Estado está obligado a iniciar *ex officio* y sin dilación, una investigación seria, independiente, imparcial y efectiva[1], de las violaciones graves a derechos humanos, como en el caso que nos ocupa ocurrieron.

4. Los actos sufridos por **A1†**, y su familia, constituyen un atentado al derecho a la inviolabilidad del domicilio, a no ser objeto de detenciones arbitrarias, a su integridad física y, finalmente a la vida, previstos en los artículos 1°, 14 y 16, párrafos primero, 19, párrafos quinto y último, y 20, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 y 12 de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura; y 5.1 y 5.2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que señalan que nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

5. Se entiende como "…violaciones graves a los derechos humanos a los actos u omisiones que impliquen ataques al derecho a la vida; que comprometan la integridad física o psíquica de las personas, o su seguridad…"[2] así como aquellas que puedan afectar a una colectividad o grupo de individuos, por lo que, con un enfoque lógico- jurídico de máxima protección de la víctima, a la luz de los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, de los precedentes emitidos por el Organismo Nacional, los criterios jurisprudenciales aplicables tanto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como de la CrlDH, en este caso se acreditaron violaciones graves a derechos humanos de **A1†**, atribuibles a servidores públicos adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública. Es importante continuar con la investigación de los hechos y pronunciarse en el margen de la competencia de este Organismo como a continuación se detalla.

VIII. DE LAS VIOLACIONES GRAVES A DERECHOS HUMANOS.

1. Las violaciones graves a derechos humanos, son aquellas que, analizadas en el caso concreto, de acuerdo a su contexto y circunstancias particulares, actualizan los criterios cualitativos y/o cuantitativos que los ordenamientos legales internacionales y locales han determinado como tales. Para determinar la gravedad de las violaciones a derechos humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CrIDH), ha sostenido que son, por antonomasia *"[…] las ejecuciones sumarias, extra legales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos*"[3].

---

[1] Cfr. Caso Juan Humberto Sánchez, párr. 112. Ver también Caso del Penal Miguel Castro Castro, párr. 256, y Caso Vargas Areco, párr. 77

[2] Cfr. Artículo 156, de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos, que entró en vigor tres días posteriores a los hechos de queja, ya que el anterior Reglamento no estaba actualizado a los estándares internacionales.

[3] Caso Barrios altos Vs. Perú Preliminares, Fondo. Sentencia de 14 de marzo de 2001. Serie C No 75, párr. 41.

2. Adicionalmente, la CrIDH ha sido precursora de la consolidación de la comprensión de gravedad en la violación a derechos humanos y ha fijado criterios para su calificación como violaciones graves de Derechos Humanos:

- El carácter continuado o permanente de la violación; (en casos de desaparición forzada)
- La violación múltiple de varios derechos humanos protegidos;
- Especial magnitud de las violaciones en relación a la naturaleza de los derechos afectados, frente a la de la víctima y,
- La participación del estado, activa o tolerada, que forme un patrón sistemático o una práctica tolerada[4].

3. En línea con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sentado criterios jurisprudenciales de obligatoriedad en todo el territorio nacional, en donde para determinar la gravedad de violaciones a derechos humanos se requiere: comprobar la trascendencia social de las violaciones, lo cual se podrá determinar a través de criterios cuantitativos o cualitativos. El criterio cuantitativo determina la gravedad de las violaciones demostrando que tienen una trascendencia social en función de aspectos medibles o cuantificables, tales como el número, la intensidad, la amplitud, la generalidad, la frecuencia o su prolongación en el tiempo, así como, evidentemente, la combinación de varios de estos aspectos. Criterio que, en caso de no poderse aplicar en todos los casos, ya que la Suprema Corte también ha entendido que en algunos supuestos la trascendencia social de las violaciones se puede demostrar mediante un criterio cualitativo, determinando si éstas presentan alguna característica o cualidad que les dé una dimensión específica[5].

4. Por su parte la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en cumplimiento a lo estipulado en el último párrafo del apartado B del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que le transfirió la facultad otrora de la Suprema Corte de Justicia de las Nación de; investigar hechos que constituye violaciones graves de derechos humanos, cuando así lo juzgue conveniente[6] ha elaborado el la “Guía para identificar, atender y calificar violaciones graves a los derechos humanos”[7] que basado en los estándares internaciones fija como criterios para determinar como graves las violaciones a derechos humanos, los siguientes:

1. La naturaleza de los hechos humanos violatorios;
2. La magnitud o escala de las violaciones y,
3. El impacto de las violaciones.

5. En el caso concreto, y en concordancia con los criterios jurisprudenciales que, al respecto, ha sentado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que la gravedad radica esencialmente en que se presente una participación importante del Estado, al ser actos cometidos por agentes estatales o con su aquiescencia o tolerancia. Se destaca que, en el presente caso, los agentes del Estado Mexicano, adscritos a la Policía Estatal Preventiva, fueron quienes de manera directa participaron en actos lesivos de la dignidad humana, que deben ser calificados como violaciones graves a derechos humanos.

---

[4] Caso Radilla Pacheco Vs. México, *Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas*. Sentencia de 23 de noviembre de 2009. Serie C No 209, párr. 139.

[5] CFR. Tesis: 1a. XI/2012 (10a.) Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Décima Época. Número 2000296. Primera Sala. Libro V, febrero de 2012, Tomo 1. Pág. 667. Rubro: VIOLACIONES GRAVES A DERECHOS HUMANOS. SU CONCEPTO PARA EFECTOS DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA QUE LAS INVESTIGA.

[6] Artículo 102, B último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos podrá investigar hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos, cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiere el Ejecutivo Federal, alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, los titulares de los poderes ejecutivos de las entidades federativas o las Legislaturas de éstas.

[7] Informada su publicación en 10 ejemplares, en la gaceta de difusión 330 de enero de 2018, consultada en agosto de 2020, en: https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-03/330.pdf.

6. El criterio cuantitativo para determinar que, en el caso concreto se acreditan violaciones graves a los Derechos Humanos, de quien respondiera al nombre de **A1†**, así como de los **CC. Q1, A2, A3, A4, M1, M2, A5**, **A6** y **K "N",** se tiene determinado en función a la trascendencia social, y de los aspectos medibles, en este caso tenemos como mesurables; el número de efectivos que participaron en los hechos, en este caso los ocupantes de la patrulla 571, como al efecto se pudo percatar el propio quejoso y su esposa y lo acredita la evidencia recabada por el Fiscal de Ministerio Público y que fue expuesta en el juicio oral dentro de la causa penal […].

7. Es posible medir también la intensidad y la amplitud, de la agresión, misma que consistió en la incursión violenta en el domicilio de la familia de **A1†**, su sustracción y con ello privación ilegal de su libertad, el maltrato físico que recibió y fue constatado al momento de que éste solicitó atención médica, y con ello la exposición a que terceras personas le sustrajeran del hospital y le privaran la vida. Aspectos medibles que, pese a que la Corte ha sostenido, basta con que se acredite solo uno de ellos, para tener por grave a la violación de derechos humanos, en este caso es evidente la combinación de varios de estos aspectos.

8. El criterio cualitativo, analiza si en el caso determinado, se presenta alguna característica o cualidad que le dé una dimensión específica de gravedad, que trascienda la afectación particular a las víctimas. Entre estas características figuran: en primer lugar, el tipo o naturaleza del derecho violado. En este caso el cúmulo de derechos violados es:

1. La incursión violenta en la casa de la familia de **A1†**;
2. La violencia con que se trató a los **CC. A1†**, **Q1, A2, A3, A4, A5**, **A6** y **K "N";**
3. La privación ilegal de la libertad de **A1†**, con fines de causarle daño;
4. El daño a la salud física y psicológica de **A1†**, así como la exposición para que terceras personas lo sustrajeran del hospital y le privaran la vida, y
5. El impacto social de los hechos, que conculcaron la paz de la comunidad de Unión de San Antonio, Pánfilo Natera, Zacatecas.

9. Por lo que hace el estatus de la víctima, tenemos por cierto que el **C. A1†,** al enfrentarse ante la fuerza pública del estado, en su carácter de persona particular, quien se encontraba en su domicilio y en compañía de su familia, estaba colocado en condición de subordinación, y con ello se acredita su estatus de inferioridad, además de que la autoridad involucrada no contaba con un mandato legal que ejecutar para hacer imperar el estado de derecho, sino que, al margen de la legalidad, trasgredió la inviolabilidad del domicilio en cita, y le privó ilegalmente de la libertad.

10. Otro aspecto cualitativo a analizar, es el impacto de las violaciones, en este caso, las violaciones a derechos humanos del **C. A1†,** las que se cometieron a hurtadillas, en horario nocturno, incurriendo violentamente en el domicilio particular, creando una afectación directa en la persona del quejoso y su familia, así como un un impacto social en la comunidad de Unión de San Antonio, Pánfilo Natera, Zacatecas, ante la creencia que estas prácticas lesivas son reiteradas y toleradas por la autoridad.

11. Finalmente, se tiene que, los derechos humanos violentados al quejoso y específicamente a quien respondía al nombre de **A1†,** tales como la integridad, forman parte de los derechos que deben entenderse como de naturaleza "inderogable", en virtud de que conforme a lo estipulado en segundo párrafo de artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos[8], y 27.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, éstos no pueden restringirse ni suspenderse.

[8] Párrafo segundo del artículo 29 de la Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos, "…no podrá restringirse ni suspenderse el ejercicio de los derechos a la no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la protección a la familia, al nombre, a la nacionalidad; los derechos de la niñez; los derechos políticos; las libertades de pensamiento, conciencia y de profesar creencia religiosa alguna; el principio de legalidad y retroactividad; la prohibición de la pena de muerte; la prohibición de la esclavitud y la servidumbre; la prohibición de la desaparición forzada y la tortura; ni las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos."

12. Con base en lo antes referido y considerando el impacto y afectaciones causados en las víctimas, esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, califica los presentes hechos como violaciones graves a los derechos humanos. Lo que se deberá de tener en cuenta durante la tramitación de la carpeta de investigación que, por mismos hechos, conoce la Fiscalía General de Justicia del Estado, en la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, por el delito de abuso de autoridad y secuestro, marcada con el número [...]. Carpeta que, al igual que este expediente de queja, dio a inicio tras la denuncia hecha por los familiares de la víctima directa y en la que se han solicitado ordenes de aprehensión en contra de 05 personas. De los cuales la Policía de Investigación solamente ha ejecutado dos, la primera en contra de **I1**, a quien se le dictó sentencia condenatoria de primera instancia dentro de la Causa Penal […], así como posteriormente de **I2,** sin que se tenga noticia de inicio de procedimiento penal en contra del resto de personas imputadas. Lo que hace imperativo recomendar la exhaustiva investigación de los hechos.

13. Lo anterior, en función a que los hechos calificados como violaciones graves a derechos humanos, mismos que, por su naturaleza contravienen normas inderogables son -el *minimum* universalmente reconocido, - que recaen en el ámbito del *jus cogens*[9] que establecen las obligaciones de investigar y sancionar dichas prácticas, de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos que consagran tales obligaciones[10]. Además de que son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, la violación al derecho a la integridad personal[11], las ejecuciones extrajudiciales, sumarias extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

14. Por ende, la negativa o retardo en la investigación de las violaciones graves a los derechos humanos y la aplicación de las consecuencias penales, administrativas y reparatorias pertinentes, no satisface las obligaciones asumidas por un Estado parte en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el sentido de respetar los derechos fundamentales de todas las personas sujetas a su jurisdicción y en caso de no contar con legislación vigente aplicable, proveer las medidas necesarias para tal fin.[12]

15. Finalmente, la Corte ha sostenido que el Estado no puede invocar “dificultades de orden interno[13]”, para sustraerse al deber de investigar los hechos con los que se contravino la Convención Americana sobre Derechos Humanos y sancionar así, a quienes resulten penalmente responsables de los mismos. Función que, en este caso, recae en la Fiscalía General de Justicia del Estado.

IX. DE LOS DERECHOS HUMANOS VIOLENTADOS.

I) Derecho a la legalidad y seguridad jurídica en relación con la vida privada, en su modalidad de inviolabilidad del domicilio.

1. La seguridad jurídica, es el derecho que tiene toda persona a vivir dentro de un estado de derecho, es decir, bajo la tutela de un ordenamiento jurídico que imponga los límites de las atribuciones de cada autoridad; su actuación no se debe regir de forma arbitraria, sino que debe quedar restringida a lo que ordenan expresamente los artículos 14 y 16

[9] Caso Barrios altos Vs. Perú Preliminares, Fondo. Sentencia de 14 de marzo de 2001. Serie C No 75, párr. 10, 11 y 41.
[10] Corte IDH, caso de la Masacre de Las Dos Erres vs. Guatemala, óp. cit., párr. 140.
[11] Artículo 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
[12] Cfr. Artículo 1.1. y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
[13] Caso Barrios altos Vs. Perú Preliminares, Fondo. Sentencia de 14 de marzo de 2001. Serie C No 75, párr. 12.

constitucionales[14]. Así, la observancia de la Ley se convierte en el principio básico para la vida pública; ya que éste es la condición que da certeza a las personas de que, los funcionarios, no actuarán discrecionalmente, sino que sus actos se encuentran estrictamente enmarcados en un ordenamiento jurídico que los prevé. De igual forma, se puede entender como "*la prerrogativa que tiene todo ser humano a vivir dentro de un Estado de Derecho, bajo la vigencia de un sistema jurídico normativo coherente y permanente, dotado de certeza y estabilidad; que defina los límites del poder público frente a los titulares de los derechos subjetivos, garantizado por el poder del Estado, en sus diferentes esferas de ejercicio*"[15].

2. Por su raíz etimológica, seguridad deriva del latín *securitas-atis* que significa "cualidad de seguro" o "certeza", así como "*cualidad del ordenamiento jurídico que, implica la certeza de sus normas y, consiguientemente, la previsibilidad de su aplicación*"[16]. En ese sentido, esta última acepción resulta conveniente para definir la seguridad jurídica como el conocimiento y la certeza que tienen los gobernados de qué es lo que se estipula en la ley como permitido o prohibido y, cuáles son los procedimientos que se deben llevar a cabo en cada caso, según lo establecido en el marco legal de un país. Cuyos excesos o defectos pueden ser atacados en atención a la esfera jurídica que afecten.

3. Así, podemos entender que, el derecho a la legalidad puede ser definido como: la prerrogativa que tiene todo ser humano a que los actos de la administración pública, se realicen con apego a lo establecido por el orden jurídico, a efecto de evitar que se produzcan perjuicios indebidos en contra de los titulares de los derechos. Ahora bien, la interdependencia existente entre el derecho a la legalidad y la seguridad jurídica es tal, que sus contenidos dan sentido a los derechos que contienen ambos. Así, mientras la seguridad jurídica nos permite conocer nuestros derechos y obligaciones de modo claro y preciso, el principio de legalidad requiere que todo acto destinado a producir efectos jurídicos debe tener como base una disposición y un procedimiento legal.

4. Los derechos de seguridad jurídica son, quizá los que mayor relación guardan con el estado de derecho[17], en la medida que suponen un conjunto de derechos públicos subjetivos a favor de los gobernados. Pueden oponerse principalmente a los órganos del Estado a fin de exigirles que se sujeten a un conjunto de requisitos previos a la emisión de un acto que pudiera afectar su esfera jurídica y así, no caer en la indefensión o en la incertidumbre jurídica.[18] En ese sentido, el estado de derecho podemos entenderlo como el conjunto de "reglas del juego", que los órganos públicos deben respetar en su organización y funcionamiento interno y en su relación con los ciudadanos. Dicho, en términos sumamente claros, en un estado de derecho las autoridades se encuentran sujetas a las normas jurídicas.[19]

5. Por lo tanto, la seguridad jurídica implica para el gobernado la certidumbre de que su vida, su persona, sus papeles, su familia, sus posesiones o sus derechos deberán ser respetados por todas las autoridades. Y, en caso de ser necesaria su afectación, ésta se sujetará a los procedimientos y modalidades previamente establecidos en la Constitución o leyes secundarias[20]. Bajo ese entendido, la legalidad como principio y en su acepción jurídica más aceptada, establece que todo acto de los órganos del Estado debe encontrarse fundado y

---

[14] CNDH. Recomendación 25/2016, Sobre el Recurso de Impugnación de Recomendación, por Violación a su Derecho a la Seguridad Jurídica y a la Legalidad. Párr. 31. Rescatada de, https://www.cndh.org.mx/tipo/1/recomendacion?field_fecha_creacion_value%5Bmin%5D=&field_fecha_creacion_value%5Bmax%5D=&keys=&items_per_page=10&page=25. Consultada 16 de julio de 2019.

[15] Manual para la Calificación de Hechos Violatorios de los Derechos Humanos, Editorial Porrúa México, página 1, México, 2015.

[16] Real Academia de la lengua española, Diccionario de la Lengua Española, t II, 22ª, ed., Madrid, Espasa, Calpe, 2001, p. 2040.

[17] CARBONELL, Miguel, Los Derechos Fundamentales en México, CNDH, 2004, p. 585.

[18] Ídem, p. 13.

[19] Ídem, p. 585.

[20] Las Garantías de Seguridad Jurídica, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2015, p. 11.

motivado por el derecho vigente. Consagrado como derecho fundamental en el orden jurídico mexicano, las autoridades deben sujetar su actuación a lo dispuesto legalmente, por lo que no pueden proceder de manera arbitraria o abusiva, pues únicamente pueden ejercer funciones y actos de autoridad, derivada del ejercicio de una facultad que la ley le confiere[21]. Así pues, la garantía de seguridad jurídica, implica que todos los actos de autoridad que ocasionen molestia o privación en la esfera jurídica de los particulares, deben derivar de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Pues éstos, junto con la Carta Magna, constituyen el catálogo de regularidad en materia de derechos humanos en nuestro país, y garantizan la protección de la persona, su familia y sus propiedades.

6. En el Sistema Universal de protección de los Derechos Humanos, el derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica se encuentra reconocido tanto en la Declaración Universal de Derechos Humanos[22], como en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos[23], al señalarse que ninguna persona puede ser objeto de injerencias arbitrarias en su vida, familia, derechos, posesiones, etc.

7. Mientras que, en el Sistema Interamericano de protección de los derechos humanos al que el estado mexicano está sujeto, ambos derechos, la legalidad y seguridad jurídica, se consagran en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre[24] y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos[25], normatividad que señala que todas las personas tienen derecho a la protección de la ley contra actos que tengan injerencias arbitrarias en su honra, reputación, vida privada y familiar, así como en su libertad.

8. Por lo que respecta al ámbito jurídico interno, los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, proporcionan la protección del orden jurídico total del Estado mexicano, por lo que el principio de legalidad en ellos contenido representa una de las instituciones más relevantes y amplias de todo régimen de derecho. En relación, primeramente, el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su segundo párrafo, que expresamente establece: *“Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho”*. Por otro lado, la primera parte del artículo 16 de la Constitución que rige la vida del estado mexicano a su vez, establece: *“Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles y posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento”.*

9. La unión de los citados artículos constitucionales conforman la regularidad jurídica del estado mexicano, así, el artículo 14 regula constitucionalmente los requisitos generales que deben satisfacer las 5 sanciones o actos de posible privación, como son; de vida, libertad, propiedad, posesiones y derechos, en tanto que, el artículo 16 establece las características, condiciones y requisitos que deben tener los actos de autoridad al seguir los procedimientos encaminados a la imposición de aquéllas, los cuales siempre deben ser previstos por una norma legal en sentido material, proporcionando así la protección al orden jurídico total.

10. Conforme al principio de legalidad previsto por el artículo 16 constitucional, se pueden distinguir los siguientes derechos fundamentales a la seguridad jurídica:

- El órgano estatal del que provenga un acto que se traduzca en una molestia debe encontrarse investido con facultades expresamente consignadas en una norma legal

---

21 http://ordenjuridico.gob.mx/Congreso/pdf/65.pdf PRINCIPIO DE LEGALIDAD. HACIA UNA CULTURA DE RESPETO AL ORDEN JURÍDICO VIGENTE. Profr. Carlos Vidal Yee Romo.

22 Cfr. con el contenido del artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

23 Cfr. con el contenido de los artículos 6, 9 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

24 Cfr. con el contenido de los artículos V y XXV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.

25 Cfr. con el contenido del artículo 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

(en sentido material) para emitirlo;
- El acto o procedimiento por el cual se infiere una molestia, debe estar previsto, en cuanto a su sentido o alcance, por una norma legal; de aquí deriva el principio de que "*los órganos o autoridades estatales sólo pueden hacer aquello que expresamente les permita la ley*";
- El acto que infiere la molestia debe derivar o estar ordenado en un mandamiento escrito, y
- El mandamiento escrito en que se ordena que se infiera una molestia debe expresar los preceptos legales en que se fundamente y, las causas legales que la motivan.

11. Configurados estos cuatro requisitos, todo acto de autoridad que implique una molestia para el gobernado, para que esté inmerso en el marco de legalidad deben de actualizarse. Para acreditar el aspecto del principio de legalidad, es decir, el derecho a la exacta aplicación de la ley, previsto por los párrafos tercero y cuarto del artículo 14 Constitucional.

12. Con base en lo anterior, en referencia particular a los precitados artículos 14 y 16 constitucionales es preciso abundar que junto con los artículos 13, 17, 18, 20, 21, 22 y 23 del mismo ordenamiento establecen la subordinación del poder público a la ley en beneficio y protección de las libertades humanas. En ese sentido, una autoridad o servidor público, podrá incurrir en violaciones al derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica, cuando se configure alguna de las siguientes hipótesis:

A. Afectación de derechos, salvo que lo permitan las leyes expedidas con anterioridad al hecho.
B. Molestia a las personas, sus familias, domicilios, papeles o posesiones salvo que:
- funde y motive su actuación;
- sea autoridad competente.

C. Desconocimiento de los Derechos fundamentales que se determinan en la ley.
D. Desconocimiento de la presunción de inocencia de las personas acusadas de delitos, hasta que se pruebe su culpabilidad.
E. Imposición de penas y determinación de delitos que no estén previstos en la ley.
F. Creación de tribunales por actos que no sean legislativos, o que estos no sean imparciales o independientes.

13. Consecuentemente, para que los agentes del Estado cumplan o desempeñen sus obligaciones, deben cubrir todos los requisitos, condiciones y elementos que exige la Constitución Federal, así como los instrumentos internacionales suscritos y ratificados por el Estado mexicano, para que la afectación en la esfera jurídica de los particulares que en su caso genere, sea jurídicamente válida, debido a que todo acto de autoridad debe estar debidamente fundado y motivado. En este caso la injerencia en la vida privada de las personas, producto de la intromisión en el domicilio particular no lo estuvo.

14. El domicilio, es el lugar que se fija a las personas para el normal cumplimiento de sus obligaciones y para el ejercicio de sus derechos[26]. El domicilio forma parte también de los atributos de las personas individuales, junto con el nombre, la capacidad, la nacionalidad, el estado civil y el patrimonio. Por imperativo legal debe ser inviolable, atributo que, denominado como inviolabilidad del domicilio, se contempla como un derecho humano, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entendido como el derecho que tiene toda persona a no

[26] Artículo 33, Código Civil Del Estado de Zacatecas. rescatado de http://periodico.zacatecas.gob.mx/visualizar/b58b0e10-7c38-4537-80c0-fd429e376fa5;1.2

ser molestado en su persona, familia, posesiones o domicilio sin una orden por escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento[27].

15. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que, para efectos de protección constitucional ha de entenderse como domicilio: "(…) cualquier lugar cerrado en el que pueda transcurrir la vida privada, individual o familiar (…)."[28] También ha sostenido que la inviolabilidad del domicilio es un derecho fundamental que impide que se efectúe alguna entrada y registro en el domicilio de la persona a menos que se actualice alguna de las excepciones legales, previamente establecidas.

16. El derecho a la inviolabilidad del domicilio y a la vida privada y privacidad que te brinda se encuentran protegidos en los diversos instrumentos internacionales que constituyen norma vigente en nuestro país. En el orden internacional se contempla en los artículos 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos[29]; y 17.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos[30]. o

17. Por su parte, en el derecho interamericano, la inviolabilidad del domicilio se contempla en los numerales la 1.1, 11.2 y 11.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[31]; IX de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y 1, 2 y 3, del Código de Conducta para Funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley. Que en esencia contemplan que, nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.

18. La CrIDH en el "Caso Fernández Ortega y otros vs. México"[32], sostuvo que: "(...) la protección de la vida privada, la vida familiar y el domicilio implica el reconocimiento de que existe un ámbito personal que debe estar exento e inmune a las invasiones o agresiones abusivas o arbitrarias por (...) terceros o de la autoridad pública (...)".

19. Por su parte, el estado mexicano reconoce la inviolabilidad del domicilio, pues, en los párrafos primero y décimo primero del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, antes citada, se establece que, la intromisión en un domicilio deberá obedecer a orden previa expedida por autoridad competente, así las órdenes para ingresar a un domicilio denominadas órdenes de cateo única y exclusivamente pueden ser expedidas por autoridad judicial, a solicitud del Ministerio Público, por lo que a fin de asegurar la legalidad de los actos de autoridad o de sus agentes y garantizar la certeza jurídica, deben reunir los siguientes requisitos:

1) que la orden de cateo conste por escrito y sea emitida por autoridad competente que la funde y motive;
2) exprese el lugar que ha de inspeccionarse, los objetos o personas que se buscan;
3) precise la materia de la inspección y,
4) se levante un acta circunstanciada en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado o, en su ausencia o negativa, por la autoridad que practique la diligencia.[33]

---

[27] Artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, rescatada de http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Federal/pdf/wo14166.pdf

[28] Tesis constitucional y civil. "Domicilio, su concepto para efectos de protección constitucional", Semanario Judicial de la Federación, junio de 2012, registro 2000979.

[29] Declaración Universal de los Derechos Humanos, Rescatada de https://www.un.org/es/documents/udhr/UDHR_booklet_SP_web.pdf. Consultada el 14 de octubre de 2019.

[30] Consultado el 15 de octubre de 2019 en https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx

[31] Consultada el 15 de octubre de 2019, en https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm

[32] Caso Fernández Ortega y Otros Vs México, Sentencia del 30 de agosto de 201,0 (Excepción Preliminar, Fonda, Reparaciones y Costas) Pár. 137.

[33] CNDH. Recomendación, 54/2017, p. 52.

20. Los cateos domiciliarios, son los supuestos jurídicos en que la ley permite a las autoridades realizar, de manera justificada y bajo estricto control judicial, intromisiones o invasiones en la vida privada de las personas, siempre y cuando se cumplan las formalidades esenciales establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Éstas consisten en la ejecución de una diligencia ordenada judicialmente para que la autoridad pueda introducirse en el domicilio de las personas, bajo ciertas condiciones o requisitos y con un propósito definido, a efecto de que pueda cumplir con sus funciones o proseguir una investigación, pero sin causar una molestia innecesaria al particular.

21. Así, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CrIDH) ha establecido que, hay un ámbito personal que debe estar a salvo de intromisiones por parte de extraños y que el honor personal y familiar, así como el domicilio, deben estar protegidos ante tales interferencias. El ámbito de la privacidad se caracteriza por quedar exento e inmune a las invasiones o agresiones abusivas o arbitrarias por parte de terceros o de la autoridad pública. En este sentido, el domicilio y la vida privada se encuentran intrínsecamente ligados, ya que el domicilio se convierte en un espacio en el cual se puede desarrollar libremente la vida privada y la vida familiar.[34]

22. Asimismo, la CrIDH estableció en distintos casos que el ingreso de funcionarios policiales en las residencias de distintas víctimas sin orden judicial o autorización legal o con el consentimiento de sus habitantes, constituye una injerencia arbitraria y abusiva en su domicilio familiar. Por tanto, si se ingresa a un domicilio particular sin la orden judicial o la autorización legal de quien puede otorgarle el Estado viola el derecho a la vida privada, consagrado en el artículo 11.2 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma.[35]

23. En mismo sentido, el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, en la Observación General 16, “Derecho a la Intimidad”[36], acordó que el derecho a la inviolabilidad del domicilio “debe estar garantizado, respecto de todas esas injerencias y ataques provengan de las autoridades estatales o de personas físicas o jurídicas”, las cuales no podrán ser ilegales ni arbitrarias. Para que tales intromisiones sean lícitas, sólo pueden producirse en los casos en que estén previstas por la ley, que, a su vez deben apegarse a las disposiciones, propósitos y objetivos del artículo 17.1 del Pacto Internacional. Se extiende además al ámbito legislativo, pues señala que las obligaciones impuestas por este artículo exigen que el Estado adopte medidas legislativas y de otra índole para hacer efectivas la prohibición de esas injerencias y ataques y la protección de este derecho. Sencillamente, para que tales intromisiones sean lícitas, sólo pueden producirse en los casos previstos en la ley, que a su vez debe apegarse a las disposiciones, propósitos y objetivos de la Constitución y del propio Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, así como a las leyes mexicanas relacionadas en la materia.[37]

24. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostiene que la inviolabilidad del domicilio es una expresión concreta del derecho a la intimidad y a la vida privada, como lo ha señalado en la tesis Constitucional aislada que a continuación se cita:

> “**INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO. CONSTITUYE UNA MANIFESTACIÓN DEL DERECHO FUNDAMENTAL A LA INTIMIDAD.** El derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio, previsto en el artículo

---

[34] “Caso de las Masacres de Ituango Vs. Colombia”. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de julio de 2006, pp. 193 y 194; “Caso Escué Zapata Vs. Colombia”. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de julio de 2007, p. 95, “Caso Fernández Ortega y otros Vs. México”. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de agosto de 2010, p. 157.

[35] “Caso Familia Barrios vs. Venezuela”. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2011; “Caso Uzcátegui y otros vs. Venezuela”. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 3 de septiembre de 2012, p. 202.

[36] Rescatado de https://conf-dts1.unog.ch/1%20SPA/Tradutek/Derechos_hum_Base/CCPR/00_2_obs_grales_Cte%20DerHum%20%5BCCPR%5D.html#GEN16. Consultado 9 de diciembre de 2019.

[37] CNDH, Recomendación 54/2017, p. 57.

> 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, primer párrafo, en relación con el párrafo noveno del mismo numeral, así como en el artículo 11 de la Convención Americana de Derechos Humanos, constituye una manifestación del derecho fundamental a la intimidad, entendido como aquel ámbito reservado de la vida de las personas, excluido del conocimiento de terceros, sean éstos poderes públicos o particulares, en contra de su voluntad. Esto es así, ya que este derecho fundamental protege un ámbito espacial determinado, el "domicilio", por ser aquel un espacio de acceso reservado en el cual los individuos ejercen su libertad más íntima. De lo anterior se deriva que, al igual que sucede con el derecho fundamental al secreto de las comunicaciones, lo que se considera constitucionalmente digno de protección es la limitación de acceso al domicilio en sí misma, con independencia de cualquier consideración material."[38]

25. En ese esquema de certeza jurídica, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha sostenido que *"toda intromisión que realicen las autoridades a inmuebles y domicilios donde las personas desarrollen su vida privada, para que sea legal, debe estar respaldada por orden judicial, o bien, encontrarse en flagrancia. De no ser así, se acredita la violación al derecho a la inviolabilidad del domicilio y a la privacidad de las personas que se encuentren al interior, ya que se trata de una irrupción arbitraria en una de las facetas más íntimas y personalísimas de los seres humanos, como lo es el domicilio, pues se trastoca el entorno individual y, en ocasiones, familiar, con las afectaciones de diversa índole que esto pueda acarrear, emocional, de incertidumbre, de afectación patrimonial, etcétera".*[39]

26. En la Recomendación General 19, del 5 de agosto de 2011, "Sobre la práctica de cateos ilegales", la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se pronunció contra esta práctica y señaló que: *"en el desarrollo de las labores de combate a la delincuencia, las Fuerzas Armadas y las distintas corporaciones policiales y de procuración de justicia, federales y estatales, incurren frecuentemente en la realización de cateos ilegales, lo que constituye el inicio de una cadena de múltiples violaciones a derechos humanos, en virtud de que además de transgredir el derecho a la inviolabilidad del domicilio, al ejecutar dichos cateos se ejerce violencia física y psicológica/emocional contra los habitantes de los domicilios que allanan; se realizan detenciones arbitrarias… Este solo acto constituye violaciones a los derechos humanos, a la inviolabilidad del domicilio, al derecho a la intimidad o privacidad, a la integridad y seguridad personal, a la propiedad y por supuesto, a la legalidad y seguridad jurídica".*[40]

27. En atención a las citadas disposiciones jurídicas nacionales e internacionales, se destaca la obligación positiva que tienen todas las autoridades para preservar la inviolabilidad del domicilio como un derecho humano que lleva implícito la intimidad y la vida privada[41], y de realizarse esa intromisión, se acredita la violación del derecho a la inviolabilidad del domicilio y a la privacidad de las personas que se encuentren al interior, ya que se trata de una irrupción arbitraria en una de las facetas más íntima y personalísima de los seres humanos, como lo es el domicilio, pues se trastoca el entorno individual y, en ocasiones, familiar, con las afectaciones de diversa índole que esto pueda acarrear, emocional, de incertidumbre, de afectación patrimonial, etcétera.

28. Obligación de respeto que no se actualizó en el presente caso, sino por el contrario de los testimonios de los **CC. Q1** e **A2,** quienes detallaron la forma en que se afectó su intimidad familiar, ya que aseguraron que el día 05 de junio de 2018, entre las 5:00 y 5:30 horas, elementos de la Policía Estatal Preventiva ingresaron a su domicilio, sin orden alguna,

---

[38] Semanario Judicial de la Federación, mayo de 2012, Registro 2000818.
[39] CNDH, Recomendación 33/2015, p. 87.
[40] CNDH, Recomendación General 19, del 5 de agosto de 2011. Antecedentes, Pág. 3.
[41] CNDH. Recomendación 5/2018 de 20 de marzo de 2018 p. 457

golpearon y ataron a los miembros de su familia, se apoderan de dinero en efectivo y celulares, destruyeron una puerta y quebraron vidrios, para finalmente, llevarse consigo a **A1†**.

29. Intromisión en el domicilio que se acreditó con el dicho de las propias víctimas. Así, **Q1,** aseguró que, al escuchar ruidos en la calle, su compañera de vida vio por la ventana y le dijo que eran estatales, es decir, elementos de la Policía Estatal Preventiva; que, momentos después éstos ingresan con violencia, los atan con cinta gris y les colocaron objetos en la boca. Aseguró también que, después de que se fueron, se llevaron sus pertenencias y a **A1†**, fue desatado con la ayuda de su compañera de vida y al salir a la calle, algunos vecinos les dijeron que también se dieron cuenta de que eran elementos de la Policía Estatal Preventiva, de quienes les dijeron que arribaron en varios vehículos, entre ellos la unidad radio patrulla marcada con el número 571.

30. En mismo sentido, la **C. A2** declaro que ese día, 05 de junio de 2018, cuatro elementos de la Policía Estatal Preventiva, a los que identifica por portar sus uniformes negros y dos personas sin uniforme, arribaron a su domicilio en la patrulla 571, mismos que rompiendo vidrios y puertas para ingresar a su domicilio, los ataron, les cubrieron la boca con cinta, se apoderaron de dinero en efectivo y celulares y se llevaron consigo a su hijo de nombre **A1†**. De esto último, se dio cuanta hasta después de que se retiraron y se pudo desatar y desatar a los demás miembros de su familia, enterándose de que a **A1†** se lo habían llevado.

31. Este dicho, encontró sustento con la concatenación lógico jurídica, con lo informado por los demás testigos y circunstancialmente por lo dicho por la autoridad y del propio dicho de los ocupantes de las patrullas que ese día circularon por la zona en que se ubica la comunidad de San Antonio Pánfilo Natera, Zacatecas. En primer lugar, se tiene el informe que rindió el **LIC. JORGE EDUARDO CANO ALTAMIRANO,** entonces Subsecretario de Inteligencia y Política Criminal de la Secretaría de Seguridad Pública, quien indicó que los ocupantes de la patrulla 571, el día 04 de junio de 2018, y con ello, las primeras horas del 05 de junio de 2018, fueron los **CC. I3, I4, VALERIA CONCEPCIÓN REYES GUERRERO, ALONZO MARTÍNEZ MARTÍNEZ** y **I2.** Adicionalmente, aportó copia del informe que le rindiera el **INSPECTOR GENERAL ISAÍAS HERNÁNDEZ LANDEROS,** entonces Director de la Policía Estatal preventiva, en el que se dijo que, el día 04 de junio de 2018, las unidades radio patrullas que laboraron en las inmediaciones del lugar de los hechos fueron las marcadas con los números 537, 571 y 531, a quienes, para dar respuesta al caso concreto, les requirió a su vez de informes de las actividades desplegadas durante esa jornada de trabajo.

32. De este informe, y las fatigas de servicio, se tiene que los ocupantes de la unidad radio patrulla marcada con los números 537, 571 y 531, fueron los siguientes: en la patrulla **537,** los **CC. IRVIN ALEXIS CRUZ MARTÍNEZ, EFRÉN ALEJANDRO ZAPATA ROMÁN, MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ PALAFOX, JAVIER CASTELLANOS NAVARRETE** y **ÁNGEL MANUEL RAMOS NAVA**. En la **571,** los **CC. I3, I4, VALERIA CONCEPCIÓN REYES GUERRERO, ALONZO MARTÍNEZ MARTÍNEZ**, agrega a **I1,** y no cita a **I2.** Finalmente, en la unidad radio patrulla **531,** se informa fue ocupada por los **CC. RODRIGO FLORES CARREÓN, LUIS ANTONIO CUEVAS CARLÍN LUIS CARLOS PIÑÓN VILLANUEVA, JUAN MANUEL RAMÍREZ CALZADA** y **JUAN FERNANDO GARCÍA TREJO.**

33. En este informe que de forma conjunta rindieron los ocupantes de las unidades radio patrullas 537, 571 y 531, al entonces Director de la Policía Estatal Preventiva, dan cuenta de los recorridos y actividades realizadas durante el día 04 de junio de 2018 y las primeras horas del 05 de junio de 2018, en las que no se indicó que se ejecutó la serie de violaciones a derechos humanos que inició con la intromisión violenta a un domicilio particular, sin que mediera orden de autoridad competente, ni se actualizara algún caso de excepción que diera legalidad a este acto.

34. Así, los elementos de la Policía Estatal Preventiva en cita, aseguraron que, por la mañana del día 04 de junio de 2018, se constituyeron en el municipio de Loreto, Zacatecas; luego, la patrulla marcada con el número 537, regresó a la ciudad capital, y las 531 y 571, permanecieron en Loreto, Zacatecas. Agregó que, por la tarde, y ya que había regresado la unidad 537, que había acudido a la capital y que, de manera conjunta se trasladaron al municipio de Pánfilo Natera, Zacatecas. Posteriormente, al de Ojocaliente, Zacatecas, de ahí otra vez a Pánfilo Natera, Zacatecas y, finalmente, a la ciudad de Zacatecas.

35. Por la importancia que revisten para acercarnos a la verdad histórica, se retoman los hechos cercanos al horario en que las víctimas ubican el inicio de su agresión. Así, la autoridad dijo que, aproximadamente a las las 03:15 horas del día 05 de junio de 2018, en el municipio de Ojocaliente, Zacatecas realizaron un reporte de un vehículo al parecer abandonado, del que solicitaron datos en la denominada Plataforma México[42], para saber si éste tenía o no reporte de robo. Dijeron además que, concluida esta actividad, se dirigieron de este municipio al municipio de Pánfilo Natera, Zacatecas, actividad que ubican a partir de las las 04:00 horas, y que se encuentra en las cercanías de la comunidad donde se encuentra el domicilio que se allanó.

36. La imputación de la intromisión violenta a un domicilio ubicado en la comunidad de San Antonio, Pánfilo Natera, se dijo que fue a las 05:00 horas, aproximadamente. Horario que es coincidente con el reconocido por la autoridad, y se rescata la cercanía con el sitio en que dicen se encontraban, lo que material y temporalmente les permitía trasladarse al domicilio particular en cita, cometer el atropello que se les imputa y retomar las actividades que dicen realizaron. Para entender por qué con esta manifestación, esta Comisión asume que la autoridad hizo un reconocimiento o confesión parcial de los hechos, es imperativo conocer en dónde se ubica la comunidad de San Antonio, Pánfilo Natera, Zacatecas en relación con los municipios de Ojocaliente, Zacatecas y Pánfilo Natera, Zacatecas. Ojocaliente está ubicado en la Carretera Federal 45, y a una distancia de la ciudad de Zacatecas, Zacatecas de 47.3 kilómetros. El municipio de General Pánfilo Natera, se ubica en la Carretera Estatal 144 y se encuentra a 20.5 km de Ojocaliente. En misma carretera estatal 144, se encuentra a 11.9 kilómetros de Ojocaliente, Zacatecas, el entronque a la comunidad de Unión de San Antonio, la que se ubica a 3 kilómetros de la carretera estatal[43], es decir, dentro de las cercanías en donde la autoridad reconoce que se encontró a las 03:15 horas en Ojocaliente, Zacatecas, es decir, a 15 minutos del lugar.

37. Ahora bien, el oficial **WILLIAM CASARA**, a cuyo mando se encontraba el llamado grupo [...] o Grupo Especial de Operaciones, conformado por las unidades radio patrullas 531, 537 y 571, aseguró que no ingresaron a la comunidad de Unión de San Antonio, y fundó su dicho en el hecho de que en la carretera Estatal 144, atendió un reporte de accidente vial de una unidad motriz y un semoviente, más reconoció que se encontraban en las cercanías del lugar y en los tiempos en que se imputó el hecho, pues dijo que atendieron la seguridad en el municipio de Ojocaliente y regresaron a Pánfilo Natera, Zacatecas por la carretera 144, en un horario de 3:30 o 3:40 de la mañana de día 05 de junio de 2021, también citó que, más allá del entronque de Unión de San Antonio y Rancho Nuevo, observó una camioneta del lado izquierdo de la carretera, que pidió que alguien la revisara, a donde se acercó la patrulla 537 y le informan que una persona atropelló una vaca, que se regresaron y platicó con el conductor y fue este quien le dijo no necesitar atención y que ya había llamado a un

---

[42] Es un concepto tecnológico avanzado de telecomunicaciones y sistemas de información, que integra todas las bases de datos relativas a la seguridad pública, con la finalidad de que se cuente con todos los elementos de información, para que las instancias policiales y de procuración de justicia de todo el país, lleven a cabo las actividades de prevención y combate al delito, mediante metodologías y sistemas homologados. Rescatado de https://www.inegi.org.mx/contenidos/eventos/2008/VIIRNE/Mesa5/19/JoseAntonioRivera.pdf

[43] https://www.google.com.mx/maps/place/Ojocaliente,+Zac./@22.5851935,-102.2789404,13z/data=!4m16!1m10!4m9!1m3!2m2!1d-102.1460306!2d22.6474279!1m3!2m2!1d-102.1674982!2d22.6607887!3e0!3m4!1s0x86823d2b47f9f30f:0xf4d359b6dcc29379!8m2!3d22.5705851!4d-102.2546482

familiar, que no necesitaba ayuda, por lo que se retiran y colocan un puesto de vigilancia en el municipio de Pánfilo Natera, Zacatecas. Dijo que, desde ese puesto de control, vio como a las 4:28 de la mañana, salieron elementos de la Policías Municipal, y los alcanzaron para preguntarles si requerían algún apoyo, y éstos le dijeron que iban a un reporte de un accidente con una vaca, que con su auxilio ubican a los elementos de la Policía Preventiva Municipal en el lugar del accidente, más ya no se encontraba el vehículo que participó en el accidente. Por lo que siguieron su recorrido y regresaron a la base, llegando a la misma a las 6:30 horas.

38. Versión la anterior que reconoce que se encontraron en las cercanía del lugar a las 3:30 o 3:40 y 4:28 horas, horarios indicados por el propio dicho del oficial, quien citó el accidente con el semoviente como el motivo por el cual se encontraban en el lugar, más este dicho en cuanto al horario de atención no es coincidente con el parte de novedades que registró la Policía Preventiva del municipio de General Pánfilo Natera, Zacatecas, en donde se tiene registro de que fue a las 11:50 horas del 04 de junio de 2018, cuando recibieron el llamado en el que se reportó el accidente vial, el que atendieron en sus posibilidades y al haber solo daños materiales, regresaron a sus instalaciones a las 01:50 horas del 05 junio de 2018, es decir, mucho tiempo antes de las 4:28 horas, que citó el oficial de la Policía Estatal Preventiva, como aquel en el que vio salir la unidad de la policía municipal, le ofreció ayuda y les ubicó en el lugar exacto de los hechos.

39. Consecuentemente, que la autoridad reconozca que después de las 04:00 horas circuló por la carretera estatal número 144, en la que se encuentra el entronque a la comunidad de Unión de San Antonio, Pánfilo Natera, Zacatecas, comunidad que se ubica a 03 kilómetros de esa vía estatal por donde circulaban, hace convicción en los hechos que se les imputan. Además, de que lo argüido por los elementos involucrados en el sentido de que se atendió un accidente vial, no coincide en horario con lo informado por quienes sí atendieron el accidente, como fue la Policía Preventiva Municipal, lo que resta credibilidad a la negativa de la autoridad.

40. Al respecto, se contó con la declaración del total de los oficiales de la Policía Estatal Preventiva, quienes, si bien negaron los hechos, sí reconocen el horario en que circularon por esta vía estatal, que es coincidente con aquél en el que se sufrió la violación al domicilio de las personas víctimas, lo que se configura como un indicio que permita crear convicción acerca de su responsabilidad en los que se les imputaron.

41. Al contrastar los datos, se evidencia que, efectivamente, elementos de la Policía Estatal Preventiva, faltaron a la verdad al momento de rendir informe y declarar ante este Organismo y sobre todo, que violentaron los derechos humanos de las personas víctimas, esto es flagrante ya que el parte de novedades de la Policía Preventiva del municipio de General Pánfilo Natera, Zacatecas al que se tuvo acceso en esta investigación, se centra la actividad desplegada por el accidente vial ocurrido en la carretera 144, en un horario de entre las 23:30 horas del 04 de junio de 2018, y las 01:30 horas del día siguiente. Dicho que se robustece con lo declarado por el **C. JOSÉ JUAN FUENTES TORRES**, elemento de Seguridad Pública municipal, quien dio cuenta del apoyo que se brindó a la persona que participó en el accidente. Tal como dar seguridad vial en la carretera, ya que el semoviente se encontraba sobre la cinta asfáltica; arrastrar el mismo para que despejara la vía y saber que un conocido de la persona que participó en los hechos ayudaría con su vehículo a remolcar el vehículo accidentado. Todo esto en un horario que citó entre 23:00 y 00:00 horas, y no después de las 4:00 horas, como señalo el oficial **FUENTES TORRES** de la Policía Estatal Preventiva que reconoció haber estado en ese lugar, como el horario en que acompañó a los elementos municipales al lugar de los hechos del accidente con el semoviente. Dicho que una vez más, no robustece el dicho de los elementos de la Policía Estatal Preventiva, pues adicionalmente a lo antes citado, el oficial municipal, categóricamente aseguró que durante el auxilio que dio en el accidente, no tuvo contacto con algún elemento de la Policía Estatal Preventiva.

42. En línea con lo investigado, se contó con la declaración del **C. T3,** persona que participó en los hechos de tránsito con el semoviente, quien sin señalar horarios, indicó que una vez que tuvo el accidente, solicitó a una persona que identificó por su alias, "[…]", que hablara a la Policía Preventiva para que reportara su accidente, entendemos que el horario de 23:30 horas que aparece en el parte de novedades dando a conocer el accidente vial, obedeció a la llamada de la persona a quien le solicitó el señor **MÉNDEZ TORRES,** que le auxiliara con ese apoyo. Siguió manifestando que, posteriormente, arribaron dos elementos de la Policía Preventiva, y dijo además que estos elementos municipales revisaron el lugar, se percataron que la vaca no tenía identificación de su dueño y que se retiraron. Ahora bien, por registro del parte de novedades, se advierte que éstos arribaron a su base a las 1:30 horas, para la debida verificación de lo anterior se citó al **C. JOSÉ JUAN FUENTES TORRES**, cuyo dicho se analizó y del que se desprende que durante la atención al reporte donde se vio implicado un automóvil y una vaca, señala no haber visto a ningún elemento de la policía Estatal, ni patrullas, indicando que el horario de esto fue entre las 11:00 y las 12:00 o 24:00 horas del día 4 de junio del 2018. Ahora bien, toda vez que el **C. ALFREDO MONTES CORDERO,** ya no forma parte de esa corporación, no fue posible contar con su testimonial.

43. El mismo testigo de los hechos, es decir, la persona que participó en el accidente vial con el semoviente, siguió manifestando que después de este auxilio municipal, transcurrieron alrededor de tres horas, es decir, si los elementos de la Policía Preventiva Municipal regresaron a la base a las 01:30 horas, con las tres horas adicionales que dijo que transcurrieron serían las 4:30 horas, cuando arribaron, por su dicho 6 o 7 elementos de la Policía Estatal Preventiva, de quienes dijo, efectivamente revisaron el lugar y se percataron de la vaca, más agregó que; "se bajaron muy encarrerados", es decir, los notó con prisa y dijo categóricamente que, en ese lugar, solo estuvieron 03 minutos, aproximadamente.

44. Con lo anterior, se tiene por cierto que, los elementos de la Policía Estatal Preventiva, al mando del oficial **WILLIAM CASARA,** acudieron a la comunidad de Unión de San Antonio, entre las 4:00 y las 5:00 horas del día 05 de junio de 2018, que, si bien se encontraron el accidente vial en la carretera, éste solo les detuvo 03 minutos, aproximadamente, ello por la prisa que la persona accidentada pudo denotar en ellos. Lo que permite advertir a este Organismo, acerca de la falta a la verdad con que se condujo dicho elemento, al pretender ubicar su participación, junto con los elementos de la Policía Preventiva Municipal, quienes 03 horas antes habían hecho lo propio. Lo que crea certeza en la imputación que se les hizo, es decir, que acudieron a la comunidad de Unión de San Antonio, en donde se introdujeron en un domicilio en donde perpetraron hechos que, a más de ser delictivos, lesionaron la esfera de derechos humanos de las personas víctimas. A misma convicción arribó el Tribunal de Enjuiciamiento, cuando tras audiencia de juicio, condenó a la persona de **I1**, otrora elemento de la Policía Estatal Preventiva, a quien sentenció por secuestro agraviado, al considerar colmados los extremos de los artículo 9º de la Ley para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro[44], en cuando al delito imputado, así como las calificativas de agravantes contempladas en las Fracciones I, los incisos b), c) y d) y Fracción II, inciso a).

45. Pera tener por cierta la presencia de efectivos de la Policía Estatal Preventiva, en el domicilio del quejoso y demás agraviados, tenemos que, ante la autoridad judicial, se desahogaron las testimoniales de los **CC. Q1** e **T1**, cuyos dichos, al igual que lo asentado al momento de presentar queja, son coincidentes al señalar que escucharon ruido al exterior de su vivienda, al ver hacia afuera ubicaron unidades de la Policía Estatal Preventiva, entre ellas la patrulla marcada con el número 571, para posteriormente escuchar cómo ingresaron violentamente al domicilio, los golpearon, amordazaron con cinta gris, se apoderaron de sus pertenencias y finalmente, se llevaron consigo a su hijo.

---

[44] LEY GENERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS EN MATERIA DE SECUESTRO, REGLAMENTARIA DE LA FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2010. Última reforma publicada 19-01-2018.

46. El Tribunal de Enjuiciamiento, contó también con el dicho o testimonial desahogada en audiencia de debate, a cargo de otros ocupantes de la vivienda, como son los **CC. VI7** y **A3,** quienes son pareja y compartían la misma habitación, los que se dieron cuenta de los destrozos realizados y de cómo preguntaban por otra persona de esa familia, golpeaban a los varones jóvenes y, finalmente cómo fue que se llevaron consigo a **A1†**.

47. Ante la autoridad judicial se desahogó también la testimonial de la **C. T1,** quien es vecina del lugar y dio cuenta de cómo se percató de la presencia de elementos de la Policía Estatal Preventiva, las primeras horas del día 05 de junio de 2018, dando razón fundada de su dicho en atención a los horarios habituales de su vida familiar y sobre todo, identificando la presencia de unidades de la Policía Estatal Preventiva, entre ellas una camioneta blanca y, una patrulla marcada con el número 571, las que pudo ver que circulaban con las luces apagadas.

48. Por su parte, en la etapa de investigación inicial, se tuvo acceso a otro dato de prueba, este en atención a la entrevista al **C. T2,** quien es vecino del lugar y también dio cuenta de la presencia de elementos de la Policía Estatal Preventiva en el domicilio de los **CC. Q1** e **T1**, así como haber escuchado ruido de vidrios al quebrarse y de cómo las unidades motrices se retiraron, con dirección a la carretera y a gran velocidad.

49. En la etapa de investigación, dicho órgano jurisdiccional se allegó también del dato de prueba que aportó la testimonial de la **C. A6,** quien dijo se esposa de otro hijo de la señora e **T1**, por quien preguntaban los elementos de la Policía Estatal Preventiva, y quien, al igual que los anteriores se enteró de que ingresaron de manera violenta, causaron destrozos en el interior y se llevaron amordazado a **A1†**.

50. Con todo lo anterior, fue que la autoridad judicial, tuvo por cierto, más allá de toda duda razonable que, se privó de la libertad a una persona, con la intención de causarle daño, lo que actualizó la figura típica de secuestro. A más de que, la privación de la libertad se ejecutó actualizando condiciones que califican como agravada la conducta punible, como fue: que se realizó por un grupo de más de dos personas, quienes utilizaron la violencia, allanaron un inmueble y pertenecían a una institución de seguridad pública, concretamente a la Policía Estatal Preventiva.

51. Convicción judicial que es acorde con lo investigado por este Organismo Protector de Derechos Humanos, pues como se dijo, con el citado informe de autoridad, y en la testimonial que prestaron los elementos de la Policía Estatal Preventiva, se aseguró que las tres unidades circularon juntas, que al encontrarse en el municipio de Loreto, Zacatecas, ubicaron una unidad motriz con muestras de abandono como son las llantas ponchadas, la que con auxilio de Grúas Márquez trasladaron a la ciudad de Zacatecas, y fue escoltada por la unidad 537, la que de regreso de esta actividad se unió nuevamente a las unidades 531 y 571, las que durante ese tiempo permanecieron en el municipio de Loreto, Zacatecas. Información que, los elementos de la Policía Estatal Preventiva, ratificaron tal y como se asentó en el informe, sin embargo, faltan a la verdad, cuando aseguran que las unidades 531 y 571, permanecieron en el municipio de Loreto, Zacatecas, hasta que regresó la 537, y ya todas juntas se trasladaron al municipio de Pánfilo Natera.

52. Como se dijo, la unidad 537, estaba ocupada por los oficiales de la Policía Estatal Preventiva, **IRVIN ALEXIS CRUZ MARTÍNEZ, EFRÉN ALEJANDRO ZAPATA ROMÁN, MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ PALAFOX, JAVIER CASTELLANOS NAVARRETE** y **ÁNGEL MANUEL RAMOS NAVA,** quienes dan cuenta de cómo escoltaron a la unidad de Zacatecas, a una grúa, que transporto una unidad automotriz abandonada en el municipio de Loreto. De ésta manera, en la declaración del **C. IRVIN ALEXIS CRUZ MARTÍNEZ,** elemento de la Policía Estatal Preventiva, refirió que el arribo al municipio de Loreto, aproximadamente las 13:00 horas, procedieron a dar patrullaje, cuando encontraron un vehículo Yukón, color arena, desbalijado, el que trasladaron a la ciudad de Zacatecas; que la

grúa fue escoltada con la unidad en la que él viajaba, que arribaron a la base de Policía Estatal, como a las 18:30 horas, entregaron la unidad y se regresaron a Loreto, Zacatecas, encontrándose con las otras dos unidades 531 y 571 en el municipio de Loreto, para dirigirse al municipio de Pánfilo Natera, Zacatecas, con lo que se tiene por cierto que, entre las 14:00 y 19:00 horas, las unidades 531 y 571, estuvieron solas, los ocupantes de las mismas aseguran que en el municipio de Loreto, Zacatecas, sin embargo, **A5**, y víctima de los hechos, asegura que se encontraban en las cercanías de su domicilio en la comunidad de San Antonio, Pánfilo Natera

53. Por los hechos que se reprochan en esta cuerpo recomendatorios, se integró la Carpeta de Investigación […], en la que se concretó la aprehensión de **I1,** quien enfrentó la causa penal […], misma que en audiencia de juicio se desahogaron las testimoniales de las víctimas, entre ellas **A3**, **A2** y **VI7**, quienes ante tribunal de enjuiciamiento, amonestados de conducirse con verdad, manifestaron que el día 04 de junio de 2018, vieron la patrulla 571, rondando su casa y que incluso se ubicó en la parte trasera de su domicilio. De éstas testimoniales se rescata, la presencia de unidades de la Policía Estatal, además de los hechos acontecidos en la madrugada del 05 de junio de 2018, en la tarde del día 04 de junio de 2018, **VI7** en compañía de A1†, dio cuenta de haber visto a la patrulla 571, por la tarde del día 04 de junio de 2018, merodeando las inmediaciones de su domicilio. Se sostiene entonces, que la autoridad faltó a la verdad, cuando aseguró que durante los recorridos de los días 04 y 05 de junio de 2018, no se ingresó a la comunidad de Unión de San Antonio, ya que se tiene evidencia que ingresó dos veces, una por la tarde del 04 de junio, en donde se hizo seguimiento del domicilio y pudieron ser vistos por los ocupantes de esta vivienda y, posteriormente, a las primeras horas del día siguiente, en donde se perpetraron los hechos, materia de la presente recomendación.

54. En la citada Carpeta de Investigación se contó además de éstas testimoniales rendidas en el Juicio Oral de la causa penal […], al concatenarse con la evidencia que aportó la información legalmente obtenida, mediante autorización federal, para conocer la ubicación de la fuente de alimentación de señal de los teléfonos de **A1†**, así como el de la persona procesada hasta el momento, el **SR. I1**, números telefónicos que el Juez Presidente del Tribunal de Enjuiciamiento los ubicó con sus tres números de terminación, siendo el 758, de la persona acusada y el 903, el de la víctima, éste último se reportó como ubicado en la Unión de San Antonio, Pánfilo Natera a las 17:08:52, así como a las 23:12:08.

55. En tanto que, el de **I1,** persona sentenciada por estos hechos, se ubicó a las 14:59:11, recibiendo señal de la antena que alimenta a la comunidad del Saucito, Pánfilo Natera, Zacatecas, es decir, fuera del municipio de Loreto, donde de forma unánime, pero sin verdad, manifestaron los ocupantes de las patrullas 531 y 571, no se movieron hasta después de que regresó la unidad 537, que había venido a la ciudad de Zacatecas, y arribó a la ciudad capital a las 16:30 horas, por lo que su regresó, atendiendo la distancia que media entre Zacatecas, Zacatecas y Loreto, Zacatecas, que es de 106 kilómetros, y en relación a la velocidad contemplada en esa vía de comunicación que es de 90 k/h, el tiempo de llegada es de 1 hora con 15 minutos, aproximadamente, es decir, que estuvieron de regreso en ese municipio hasta después de las 18:00 horas, y si fuera como su dicho lo manifestó, es decir, que no se movieron de Loreto, Zacatecas, no tendría por qué registrarse el teléfono en la antena que alimenta el servicio de telefonía celular la comunidad del Saucito, Pánfilo Natera, Zacatecas, comunidad que se encuentra a a 72.3 kilómetros, por la carretera estatal número 144 y a 83.6 kilómetros por la carretera a Loreto, Zacatecas y la comunidad de Tierra Blanca, en ambas vías se toma más de una hora y veinte minutos de trayecto[45].

[45] https://www.google.com/maps/dir/Loreto,+Zacatecas/El+Saucito,+Zacatecas/@22.4985708,-102.2817123,10z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x8681f953ee0e942d:0x125e8c90a4e7ce61!2m2!1d-101.9890236!2d22.2715352!1m5!1m1!1s0x8682287583dc5d1b:0xa3cb58ec0475582!2m2!1d-102.0977097!2d22.7299615!3e0

56. Con lo anterior, se evidencia que las patrullas 531 y 57, contrario a lo relatado por el hoy imputado, sí se movieron del municipio de Loreto, Zacatecas, y con el resto de información que aportó la extracción de datos del teléfono celular de la persona procesada, es evidente que acudieron a la Comunidad de Unión de San Antonio en donde, las primeras horas del siguiente día, perpetraron los hechos que nos ocupan. Esto es inconcuso, toda vez que como se adelantó en las líneas anteriores, las víctimas de los hechos vieron la unidad 571, en las cercanías de su domicilio y porque adicionalmente, el teléfono de la persona procesada recibió alimentación de la antena que cubre el servicio en la comunidad de Unión de San Antonio, Pánfilo Natera, Zacatecas a las 17:18:04 horas, tiempo que coincide con el dicho de las víctima el **C. A3**, quien en audiencia de debate del juicio oral aseguran que los ocupantes de las patrullas de la Policía Estatal Preventiva, acudieron a la comunidad en donde viven, por la tarde del día 04 de junio de 2018, y asecharon su casa, incluso se colocaron tras su domicilio. Con lo que se acredita que la autoridad faltó a la verdad cuando indicó que en el tiempo que la unidad 537 acudió a Zacatecas, a llevar un vehículo, las dos restantes 531 y 571, permanecieron en Loreto, Zacatecas.

57. Ahora bien, y como se ha sostenido, la negativa de la autoridad para indicar que sí acudieron a la comunidad de Unión de San Antonio, Pánfilo Natera, Zacatecas, se desvaneció con la evidencia que aportó el dicho de las víctimas y la extracción autorizada de los datos de los teléfonos celulares antes citados. Lo que acreditó que no solo se faltó a la verdad, sino que se violentó una serie de derechos de las personas víctimas de estos hechos, iniciando con la introducción violenta a su domicilio.

58. En cuanto al horario en que finalmente se consumaron los hechos violatorios de Derechos Humanos, se tiene por cierto que los elementos de la Policía Estatal preventiva, acudieron en la madrugada del 05 de junio de 2018, a la comunidad de Unión de San Antonio, tal y como se probó en juicio oral, con la extracción de datos del teléfono de la persona procesada por estos hechos, quien era elemento de la Policía Estatal Preventiva, y se desempeñó los días 04 y 05 de junio de 2018 en la unidad 571, cuyo número de telefonía celular se ubicó a las 4:07:24, en la antena que da cobertura a la comunidad de Unión de San Antonio; a las 4:27:24, en la que alimenta la comunidad de El Saucito; a las 4:59:07, en la que cubre la Unión de San Antonio, y finalmente a las 5:10:05, en la ubicación de la Unidad Regional de Seguridad (UNIRSE) del Municipio de Trancoso, Zacatecas, es decir, de regreso a la ciudad capital.

59. Adicionalmente, en la Carpeta de Investigación, que por esos hechos se integró, y posteriormente en audiencia de debate, se contó con las entrevistas en calidad de testigos de los **CC. T1** y **T2,** vecinos del lugar, quienes detallaron lo que pudieron ver desde sus domicilios, es decir, la presencia de la unidad radio patrulla de la Policía Estatal Preventiva, marcada con el número la 571, así como otra camioneta de color blanco. Las que se estacionaron en la parte posterior de la casa de las personas quejosas, escucharon ruidos de vidrio al romperse, gritos y golpes, para posteriormente retirarse del lugar. Dichos de los que dan razón, en atención a que ese horario de estar despierto es habitual en ellos, en función a que se preparan para que él salga de casa a trabajar y el camión de traslado pasa a tempranas horas por los trabajadores que en ese lugar se encuentran.

60. Por nuestra parte, y una vez que personal de este Organismo realizó investigación de campo, contó con la referencia dada por **T2**, vecina del lugar, quien también refirió haber escuchado ruido de vidrios y gritos en la casa de las personas aquí identificadas como víctimas, lo que da da certeza a la conclusión que nos ocupa, pues se contó con un conjunto de evidencia que, acredita plenamente que elementos de la Policía Estatal Preventiva, al mando de **WILLIAM CASARA LUNA,** otrora **INSTRUCTOR ESPECIALIZADO EN TÁCTICA Y ESTRATEGIA POLICIAL** de la Policía Estatal Preventiva, el día 05 de junio de 2018, ingresaron en el domicilio de la señora **[…]**, en un horario nocturno, y sin autorización legal, ni el consentimiento de sus habitantes, de manera autónoma concretó violaciones a derechos humanos, pues constituyó una injerencia arbitraria y abusiva en su domicilio familiar, ello con independencia al cúmulo de violaciones a derechos humanos que

posteriormente se perpetraron. Por tanto, la Comisión concluye que se violó el derecho consagrado en el artículo 11.2 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de las personas que en la misma habitaban, consistente en el derecho a la legalidad y seguridad jurídica en relación a la vida privada en su modalidad de inviolabilidad del domicilio.

II. Derecho a la legalidad y seguridad jurídica, en relación con el derecho a no ser objeto de detención ilegal.

61. El estado de derecho en el que los Estados Unidos Mexicanos, está inserto, obliga a los agentes del mismo a que sus acciones guarden estricta relación con el orden legal imperante, y con ello propiciar a los gobernados un ambiente de certeza y legalidad. Así, el derecho a la legalidad y seguridad jurídica en materia de libertad personal, garantiza la facultad de una persona para desplazarse libremente de un lugar a otro, sin ser detenida ilegal o arbitrariamente. Debido a la amplitud de este derecho, diversos instrumentos nacionales e internacionales, regulan sus limitaciones, a fin de salvaguardar sus diferentes aristas y garantizar así su ejercicio pleno. En este sentido, la Corte Interamericana ha distinguido dos aspectos relacionados con las restricciones a la libertad personal. Uno material, relativo a que este derecho sólo podrá contar con los límites o restricciones que se hayan reconocido expresamente en la ley; y otro formal, referente a que éstas deben hacerse con sujeción a los procedimientos objetivamente definidos por la misma[46].

62. En el Sistema Universal, la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que "nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado"[47]. Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, señala que todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales, añadiendo que, sólo se privará de ésta a las personas por causas previamente fijadas por la ley, y con estricto apego al procedimiento establecido en ésta[48]. Asimismo, en este instrumento en su numeral 9 apartados 2, 3, 4 y 5, se establecen las siguientes garantías, estipuladas a favor de las personas que sean privadas de su libertad:

a) Derecho a ser informada de las razones de su detención y de la acusación formulada en su contra.
b) Derecho a ser llevada sin demora ante un juez, a fin de que sea juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad.
c) Derecho a recurrir ante un tribunal, a fin de que éste decida sobre la legalidad de su prisión.
d) Derecho a que, en caso de ser objeto de una detención o prisión ilegales, le sea reparado dicho daño.

63. Por su parte, la Asamblea General de las Naciones Unidas, adoptó a través de su resolución 43/173, de fecha 9 de diciembre de 1988, el Conjunto de Principios para la Protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión. Estableciéndose así, que el arresto, detención o prisión se deberán llevar a cabo en estricto cumplimiento de la ley y mediante control judicial[49]. La seguridad jurídica respecto de la puesta a disposición ministerial sin demora a que hace alusión el artículo 16 constitucional, párrafos primero y quinto, es una protección que otorga el derecho a cualquier persona que sea detenida a ser presentada ante la autoridad correspondiente sin dilaciones injustificadas, para que ésta valore el aseguramiento de la(s) persona(s) y, en su caso, resuelva su situación jurídica.

64. El derecho invocado comprende el principio de legalidad, que implica "que los poderes públicos deben estar sujetos al derecho bajo un sistema jurídico coherente y permanente,

---

[46] Caso Gangaram Panday vs. Suriname. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de enero de 1994. Serie C No 16, párr. 17.
[47] Art. 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
[48] Art. 9.1. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
[49] Principios 2, 3 y 4 de la Resolución 43/173 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de fecha 9 de diciembre de 1988.

dotado de certeza y estabilidad, que especifique los límites del Estado en sus diferentes esferas de ejercicio de cara a los titulares de los derechos individuales, garantizando el respeto a los derechos fundamentales de las personas."[50] En el caso que nos ocupa, la libertad de **A1†,** se trastocó de forma tal, que se incumplieron todos los estándares de legalidad existentes.

65. Para salvaguardar el derecho a la seguridad jurídica, el Estado mexicano debe considerar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), los cuales forman parte de un plan de acción adoptado por los Estados Miembros de la ONU. Esta Alianza Universal se compone por 17 objetivos integrados por 169 metas conexas e indivisibles. En el presente asunto, debe observar la realización del Objetivo 16, particularmente la meta 16.10 que se centra en la protección de las libertades fundamentales, con arreglo a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales.

66. En en caso que nos ocupa, no podemos hablar de detención, pues la detención es un acto que cualquier persona en flagrancia o un servidor público encargado de hacer cumplir la ley, realiza para privar de la libertad a una persona y ponerla de inmediato a disposición de una autoridad competente.[51] Para que sea legal una detención debe ceñirse a lo dispuesto por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, si el acto privativo de la libertad se efectúa sin la orden correspondiente, expedida por la autoridad jurisdiccional o ministerial competente, o bien la persona que es detenida no fue sorprendida en flagrancia, o por no tratarse de un caso urgente.[52]

67. En la Recomendación General 2 "Sobre la práctica de las detenciones arbitrarias", emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos el 19 de junio de 2001, observó que "(…) desde el punto de vista jurídico, las detenciones arbitrarias no encuentran asidero legal porque son contrarias al principio de inocencia; se detiene para confirmar una sospecha y no para determinar quién es el probable responsable de haber cometido un delito".[53]

68. Sobre la arbitrariedad de las detenciones, la Corte Interamericana de Derechos Humanos asumió también que como lo establece el citado artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos "nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento por causas y métodos que -aún calificados de legales- puedan reputarse como incompatibles con el respeto a los derechos fundamentales del individuo por ser, entre otras cosas, irrazonables, imprevisibles, o faltos de proporcionalidad."[54] En ese sentido, "las afectaciones físicas injustificadas y desproporcionadas, así como las agresiones psicológicas realizadas por las autoridades al momento de una detención, califican a ésta de arbitraria".[55]

69. Los artículos 14, segundo párrafo y 16, párrafos primero, quinto, sexto y séptimo constitucionales; 9.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 3 y 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; I y XXV de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, y Principio 2 del Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión de las Naciones Unidas, reconocen esencialmente que toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales y que nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Parte o por las leyes dictadas conforme a ellas, y nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios.

---

[50] CNDH. Recomendaciones 30/2016, párrafo 67 y 53/2015 de 29 de diciembre de 2015, párrafo 37.
[51] CNDH. Recomendaciones 85/2018, párrafo 163; 53/2018, párrafo 72 y 48/2018, párrafo 68.
[52] CNDH. Recomendaciones 85/2018, párrafos 164 y 165
[53] Observaciones, inciso B, p.5 y hoja 7.
[54] "Caso Gangaram Panday Vs. Surinam", sentencia de 21 de enero de 1994, párrafo 47.
[55] CNDH. Recomendación 64/2017 de 29 de noviembre de 2017, p.158.

70. En el ámbito internacional, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU considera que las detenciones arbitrarias son aquellas "(…) contrarias a las disposiciones internacionales pertinentes establecidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos o en los instrumentos internacionales pertinentes ratificados por los Estados".[56] El citado Grupo de Trabajo, ha definido tres categorías de detención arbitraria:

1. Cuando no hay base legal para justificarla.
2. Cuando se ejercen los derechos y libertades garantizados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
3. Cuando no se cumplen con las normas para un juicio justo conforme a la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales.[57]

71. En la sentencia de 21 de septiembre de 2006, relativa al "Caso Servellón García y otros *vs*. Honduras", la CrIDH respecto a la restricción del derecho a la libertad, como lo es la detención consideró que: "(…) debe darse únicamente por las causas y condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas o por las leyes dictadas conforme a ellas (aspecto material) y, además, con estricta sujeción a los procedimientos objetivamente definidos en la misma (aspecto formal). A su vez, la legislación que establece las causales de restricción de la libertad personal debe ser dictada de conformidad con los principios que rigen la Convención, y ser conducente a la efectiva observancia de las garantías en ella previstas".[58]

72. Así, las autoridades (en este caso, elementos de la Policía Estatal Preventiva) sólo podrán privar de la libertad a las personas cuando cuenten con una orden debidamente fundada y motivada, emitida por una autoridad competente; o bien, tratándose de flagrancia o caso urgente. Supuestos en los cuales, deberán cumplir las condiciones y procedimientos previstos en la ley. De lo contrario, cualquier detención llevada a cabo fuera de dichos supuestos, se considerará ilegal, como ocurrió en los hechos materia de la presente Recomendación. Toda vez que, el 05 de junio de 2018, aproximadamente a las 5:00 horas, elementos de la Policía Estatal Preventiva, arribaron e ingresaron al domicilio de **A1†,** a quien, con lujo de violencia, privaron de su libertad.

73. Tal y como se desprende del apartado anterior, esta Comisión tiene por acreditado que, elementos de la Policía Estatal Preventiva, vulneraron el derecho a la vida privada de las víctimas, en su modalidad de inviolabilidad del domicilio, al introducirse al inmueble en que habitaban los quejosos y agraviados, haciendo uso de la fuerza. Situación que se corroboró a través de la investigación de campo que personal de este Organismo realizó en fecha 11 de junio de 2018, en la que, además de poder comprobar los daños que se le causaron a la vivienda, se contó con la entrevista de la **C. T2**, vecina del lugar, quien dio cuenta que, aproximadamente a las 4:30 horas del día 05 de junio de 2018, escuchó ruidos quebrándose en el acceso de la casa de los quejosos.

74. En mismo sentido, el acta de registro e inspección del lugar del hecho, levantada por elementos de la Policía de Investigación a las 14:45 horas, del 06 de junio de 2018, reportó ropa en desorden en varias habitaciones, así como la existencia varios vidrios de las puertas interiores rotos, lo que denota la intromisión violenta de terceras personas en el domicilio de los quejosos. Intromisión violenta en un domicilio particular que, además, la autoridad penal acreditó como agravante.

75. Al igual que este Organismo, la autoridad judicial escuchó los testimonios de los **CC. Q1** e **T1**, personas quejosas, contando además con la testimonial de **A3**, hermano de **A1†**, quien dio cuenta también de la introducción violenta de elementos de la Policía Estatal Preventiva, quienes causaron destrozos al interior de su vivienda, lesionaron a algunos de

---

[56] 9 folleto informativo 26: "Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado" (Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 9). IV inciso b, p. 2.
[57] Ibidem. "II. Ejecución del mandato del grupo", numeral 8, incisos a, b y c
[58] Párrafo 89.

sus ocupantes, les impidieron el habla tapando su boca con citan adhesiva color gris, y se llevaron a su hermano.

76. Se tuvo acceso también a la testimonial de **VI7,** esposa de **A3**, habitante de la vivienda allanada por la autoridad, y quien también indicó cómo los elementos de la Policía Estatal Preventivos, a quien identificó por sus uniformes y por la unidad radio patrulla con tubos en la caja de carga, ingresaron a su domicilio haciendo uso de la violencia y se llevaron consigo a su cuñado **A1†**. Agregó que un señor era el que daba las órdenes, pero no lo vio, que éste preguntaba en dónde estaba la droga y que por no decirles en dónde, dijeron que se iban a llevar a uno para sacarle la verdad. Dijo también que amarraron con cinta las manos de su esposo y le pusieron un calcetín en la boca. Sobre la forma en que se llevaron a su cuñado **A1†**, refirió que lo ataron también con cinta y que no traía zapatos, que pudo ver como se lo llevaban y como se iban las unidades y fue entonces que desató a su esposo.

77. Adicionalmente el dicho de la **C. T1,** vecina del lugar, quien inicialmente dio cuenta del porqué se percató de los hechos, ya que ese es su horario habitual de levantase pues su esposo se va a trabajar a las 4:30 horas, utiliza para ello un camión de pasaje de trabajadores, de ahí que estuviera pendiente de los ruidos de la calle, especialmente de unidades de motor para evitar que lo deje el camión de transporte laboral, por lo que escuchó el arribo de las patrullas, que era una, la 571 y una camioneta blanca. Unidades que circulaban a considerable velocidad y con las luces apagadas, dijo que en la caja de carga de la patrulla había personas con el uniforme de la Policía Estatal, cuyos logotipos brillaban con la luz. Dio cuanta como se colocaron en la parte posterior del domicilio de las víctimas e ingresaron al mismo, en tanto que cuatro personas uniformadas, cubiertas del rostro y con armas largas resguardaban la entrada principal, para después escuchar ruido y gritos al interior.

78. De la Carpeta de Investigación, se rescata también el dicho del señor **T2,** vecino del lugar, quien también se encontraba despierto, pues su hijo también sale a trabajar en ese horario, y que dio cuenta de que vio luces de lámparas que alumbraban a la casa de las víctimas; de que observó la patrulla 571, así como a personas uniformadas y a personas sin uniformes, ruido de vidrios al quebrarse y voces que mencionaban a un Comandante Colombiano.

79. En mismo sentido, el dicho de **A6,** víctima de los hechos, y habitante de la vivienda, dio cuenta de cómo, los elementos de la Policía Estatal Preventiva, ingresaron violentamente al domicilio de los quejosos, y preguntaban por su esposo y la droga, para posteriormente llevarse consigo a **A1†**.

80. Por si parte, la autoridad judicial arribó a la firme convicción de que la persona sentenciada, otrora elemento de la Policía Estatal Preventiva, en compañía de otros efectivos, privó de la libertad a una persona, con la intención de causarle daño, conclusión que se comparte, y en materia de derechos humanos, se tiene por cierto que los elementos de la Policía Estatal Preventiva, vulneraron el derecho a la legalidad y seguridad jurídica de **A1†**, al detenerlo de manera ilegal, una vez que ingresaron de manera violenta en su domicilio. Lo anterior, atendiendo al hecho de que, los elementos de la Policía Estatal Preventiva, que conformaron el Grupo Especial de Operaciones, al mando de **I2**, una vez que incursionaron violentamente en el domicilio de **Q1**, golpearon, ataron y amordazaron a algunos habitantes de la vivienda, mientras que, a **A1†,** lo detuvieron de manera ilegal, al no existir mandato judicial o ministerial en su contra, ni haber sido sorprendido en la comisión flagrante de un hecho delictivo que justificara que, dichos elementos, lo sustrajeran de su domicilio. Detención que, además, se tornó arbitraria, pues como se expuso en el apartado anterior, los elementos de la Policía Estatal Preventiva hicieron uso indebido de la fuerza para concretar la detención de la víctima, quien se encontraba durmiendo al interior de su domicilio. En adición a ello, una vez que los agentes concretaron la detención del joven **A1†,** tenían la obligación de trasladarlo y ponerlo a disposición de la autoridad competente más cercana, situación que no aconteció, pues, como se desprende de las constancias que

obran en autos, la víctima fue objeto de desaparición forzada, toda vez que privación de la libertad estuvo seguida de la falta de información y la negativa de proporcionar cualquier dato sobre su paradero a su familia.

81. Al respecto, la autoridad responsable no aportó medio de convicción alguna con la intención de justificar la detención de **A1†**, limitándose a negar que ésta haya existido. Negativa que no es obstáculo para concluir que, en efecto, **A1**fue víctima de una serie de violaciones a sus derechos humanos; en primer lugar, se violentó el derecho a la legalidad y seguridad jurídica en relación con la vida privada en su modalidad de inviolabilidad del domicilio, pues se ingresó arbitrariamente al que éste y otras personas ocupaban. Posteriormente, en agravio de sus derechos humanos, fue objeto de detención ilegal, pues fue sustraído de su domicilio, acción que al carecer de formalidades esenciales configuró una detención ilegal, misma que al ser negada constituyó también en perjuicio de esta víctima una desaparición forzada transitoria de personas, en relación con el derecho a no ser víctima de desaparición forzada, la que se entiende como transitoria, tras la aparición posterior de su cuerpo sin vida, pues al estar plenamente acreditado que los elementos de la Policía Estatal Preventiva, sustrajeron de su domicilio de **A1†**, la negativa a reconocer estos hechos y sobre todo la negativa del destino o paradero de la víctima, como se verá a continuación, se configuró como desaparición forzada de personas. Lo anterior es así, ya que este Organismo cuenta con diversos testimonios, tanto de sus familiares, como de terceras personas sin interés en los hechos que, vinculados con los registros de [...]localización, dan cuenta de la presencia de los elementos de la Policía Estatal Preventiva, particularmente de los tripulantes de la auto patrulla 571, en el inmueble que habitaba el joven **A1†. Testimonios que, además, son coincidentes en señalar que éste fue detenido por dichas autoridades, quienes lo subieron a uno de sus vehículos.**

III. Desaparición forzada transitoria de personas.

82. De acuerdo con lo establecido por el texto del artículo 2 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas, se entiende que, "desaparición forzada" es "*el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley*[59]*."*

83. Mismo significado contempla el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que indica: Por "desaparición forzada de personas" se entenderá la aprehensión, "*la detención o el secuestro de personas por un Estado o una organización política, o con su autorización, apoyo o aquiescencia, seguido de la negativa a admitir tal privación de libertad o dar información sobre la suerte o el paradero de esas personas, con la intención de dejarlas fuera del amparo de la ley por un período prolongado*"[60].

84. En la resolución 47/133, del 18 de diciembre de 1992, la Organización de las naciones Unidas, firma la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas(ONU)[61], misma que contempla el derecho a la libertad personal tutelado en los artículos 1.2 y 1.7, que refieren que todo acto de desaparición forzada sustrae a la víctima de la protección de la ley y le causa graves sufrimientos, lo mismo que a su familia, al tratarse de una violación que pone en grave peligro su vida. Documento que dio la pauta para la firma de documentos vinculantes.

---

[59] Artículo 2, Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Aprobada por la Asamblea General en su resolución 61/177, de 20 diciembre de 2006.
[60] Artículo 7.2, inciso i) del ESTATUTO DE ROMA DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL. Publicado en el Diario Oficial de la Federación, el sábado 31 de diciembre de 2005.
[61] Rescatada de: http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/INST%2022.pdf

85. Así, en el marco internacional de la protección de los derechos humanos, tenemos que, la desaparición forzada de personas es una violación sistemática y continuada de derechos humanos, cuya prohibición ha alcanzado el derecho de *jus cogens*[62], es decir de derecho impositivo que no puede ser eludido de ninguna manera[63]. Su proscripción se encuentra consagrada en el artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos[64], en la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas[65], y la Declaración Sobre La Protección De Todas Las Personas Contra La Desapariciones Forzadas[66]. Además del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos[67] y del Pacto de Derechos Económicos Sociales y Culturales[68].

86. En lo referente, la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas, prevé una protección jurídica especial contra esta oprobiosa conducta, al vincular a los Estados parte, para que, la normatividad interna contemple la Desaparición Forzada de personas como un delito continuado, y en su caso que el plazo de prescripción de la acción penal sea prolongado y proporcionado a la extrema gravedad de este delito; y se cuente a partir del momento en que cesa la desaparición forzada[69]. De la misma manera, la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas obliga a los Estados parte, para que la legislación local contemple para las víctimas indirectas todo el auxilio posible, la asistencia jurídica y material en la búsqueda, localización y liberación de las personas desaparecidas y, en caso de fallecimiento, en la exhumación, la identificación de las personas desaparecidas y la restitución de sus restos[70].

87. Con relación a la desaparición forzada de personas, o desaparición cometida por particulares, es obligación del Estado, tomar las medidas apropiadas para investigar sobre las conductas definidas en el artículo 2, de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas, citado previamente, independientemente a que estas sean obra de la acción del Estado o bien a cargo de personas o grupos de personas que actúen sin la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, y en todos los casos deberá procesar a los responsables[71]. Esto es así porque el artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que, es un derecho no sufrir desaparición forzada y este no puede suspenderse o restringirse aún en estado de emergencia, de excepción o de suspensión de derechos.

88. En el marco regional de protección de los derechos humanos, se contempla la protección contra la desaparición forzada en el artículo II de la Convención Interamericana sobre

---

[62] http://enciclopedia-juridica.biz14.com/d/ius-cogens/ius-cogens.htm Con esta expresión se designa al Derecho impositivo o taxativo que no puede ser excluido por la voluntad de los obligados a cumplirlo, por contraposición al Derecho dispositivo o supletivo, el cual puede ser sustituido o excluido por la voluntad de los sujetos a los que se dirige. El Derecho impositivo o ius cogens se debe observar necesariamente, en cuanto sus normas tutelan intereses de carácter público o general.

[63] Cfr. Caso Goiburú y otros Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de septiembre de 2006. Serie C No. 153, párrs. 84 y 128.

[64] Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.

[65] Aprobada por la Asamblea General en su resolución 61/177, de 20 diciembre de 2006.

[66] Adopción: Asamblea General de la ONU Resolución 47/133, 18 de diciembre de 1992. Aprobada por el Estado Mexicano mediante decreto publica en el DOF el 18 de diciembre de 2007.

[67] Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 a (xxi), de 16 de diciembre de 1966 y entrado en vigor: 23 de marzo de 1976.

[68] Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966
Entrada en vigor: 3 de enero de 1976, de conformidad con el artículo 27.

[69] ÓP. Cit. Artículo 8.

[70] Óp. Cit. Artículo 15.

[71] Artículo 3, Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Aprobada por la Asamblea General en su resolución 61/177, de 20 diciembre de 2006.

Desaparición Formada de Personas[72], normatividad que entiende por desaparición forzada, *"la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes*[73]".

89. Esta Convención sujeta a los Estados Americanos a adoptar las medidas legislativas que fueren necesarias para tipificar la desaparición forzada de personas como delito grave, y a imponerle una pena apropiada que tenga en cuenta su extrema gravedad[74]. Asimismo, el artículo XI de misma Declaración establece que: "*Toda persona privada de libertad debe ser mantenida en lugares de detención oficialmente reconocidos y presentada sin demora, conforme a la legislación interna respectiva, a la autoridad judicial competente. Los Estados Partes establecerán y mantendrán registros oficiales actualizados sobre sus detenidos y, conforme a su legislación interna, los pondrán a disposición de los familiares, jueces, abogados, cualquier persona con interés legítimo y otras autoridades*[75]".

90. La desaparición forzada de personas, por su implicación pluriofensiva de los derechos humanos, debe entenderse pues como un crimen de lesa humanidad, en la inteligencia de que, "crimen de lesa humanidad", es cualquiera de los actos contemplados en el artículo 7 del Estatuto de Roma, como son: el homicidio (asesinato); el exterminio; la esclavitud; la deportación o traslado forzoso de población; la encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional; la tortura; la violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable; la persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género; la desaparición forzada de personas; el crimen de apartheid, así como otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física[76], cuando estos actos se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque, entre estos tipos de ataques de lesa humanidad se contempla la desaparición forzada de personas.

91. Al respecto la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reiterado que, la desaparición forzada de personas y la desaparición cometida por particulares, constituye una violación múltiple de varios derechos protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos[77] que coloca a la víctima en un estado de completa indefensión, acarreando otras vulneraciones conexas, siendo particularmente grave cuando forma parte de un patrón sistemático o práctica aplicada o tolerada por el Estado[78]. Desde sus inicios, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido, que no solo es grave delito, sino que se trata de una oprobiosa violación de los derechos humanos de naturaleza múltiple y

---

[72] Convención Interamericana Sobre Desaparición Forzada de Personas. de Adoptada en Belém do Pará, Brasil el 9 de junio de 1994, en el vigésimo cuarto período ordinario de sesiones de la Asamblea General, firmada por el Estado Mexicano el 5 de abril de 2001, y ratificada el 28 de febrero de 2002.
[73] Convención Interamericana Sobre Desaparición Forzada de Personas. de Adoptada en Belém do Pará, Brasil el 9 de junio de 1994, en el vigésimo cuarto período ordinario de sesiones de la Asamblea General, firmada por el Estado Mexicano el 5 de abril de 2001, y ratificada el 28 de febrero de 2002.
[74] Óp. Cit. Artículo III.
[75] Óp. Cit. Artículo XI.
[76] Cfr. Artículo 7.1, inciso i) del ESTATUTO DE ROMA DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL. Publicado en el Diario Oficial de la Federación, el sábado 31 de diciembre de 2005.
[77] Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos.
[78] Cfr. Caso Radilla Pacheco vs Estados Unidos Mexicanos. Sentencia de 23 de noviembre de 2009 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas) párr. 139.

compleja por los numerosos derechos que viola o pone en peligro,[79] los cuales están reconocidos en diversos instrumentos internacionales que los Estados parte están obligados a respetar y garantizar.

92. Por su parte, el artículo 7.1 de la Convención Americana establece que "*toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales*". El artículo 5 de la Convención Americana dispone, en lo pertinente, que: "1*. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. 2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano*". El artículo 4.1 de la Convención dispone, en lo pertinente, que "*toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente*". El artículo 3 de la Convención establece que "*toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica*". El artículo 1.1 de la Convención establece que "*los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social*".

93. Como se dijo, la desaparición forzada de personas debe considerarse pluriofensiva y continuada o permanente[80]. El *corpus juris* de la desaparición forzada de personas, indica que ésta no solo se desprende de la definición del artículo III de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, de su preámbulo y normativa, sino también de otras definiciones contenidas en diferentes instrumentos internacionales que se han señalado y de los que se tienen como elementos concurrentes y constitutivos de la desaparición forzada de personas:

a) La privación de la libertad;
b) La intervención directa de agentes estatales o por la aquiescencia de éstos, y
c) La negativa de reconocer la detención y de revelar la suerte o paradero de la persona interesada.

94. En cuanto al carácter pluriofensivo de la desaparición forzada de personas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha declarado que, para entender el fenómeno se requiere de un análisis sistémico y comprensivo, sustentado en la necesidad de una perspectiva integral de la desaparición forzada, en razón a la pluralidad de conductas que, cohesionadas por un único fin, vulneran de manera permanente bienes jurídicos protegidos por la Convención[81]. Así, en diversos casos que se sujetaron a su jurisdicción ha sostenido que la desaparición forzada es una violación múltiple de derechos humanos y los deberes de respeto y garantía[82]. Al respecto, la Corte Interamericana ha señalado que, con la desaparición forzada de personas, se violentan los siguientes derechos: derecho a la libertad personal, derecho a la integridad personal, derecho a la vida, (en su caso) y al derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica[83], así como el derecho a la integridad personal de los familiares o víctimas indirectas[84].

---

[79] Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez *vs* Honduras. Fondo. Sentencia del 29 de julio de 1988. Serie C Núm. 4, párrafo 155.
[80] Ídem. Párr. 140.
[81] Ídem. Párrafo. 138
[82] Cfr. Cfr. Caso de las Hermanas Serrano Cruz Vs. El Salvador. Excepciones Preliminares. Sentencia de 23 de noviembre de 2004. Serie C No. 118, párrs. 100 a 106; Caso Heliodoro Portugal Vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 12 de agosto de 2008. Serie C No. 186, párr. 118, y Caso Anzualdo Castro Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de septiembre de 2009. Serie C No. 202, párr. 59.
[83] Cfr. Caso Radilla Pacheco vs Estados Unidos Mexicanos. Sentencia de 23 de noviembre de 2009 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas) párrafos. 147 al 159.
[84] Óp. Cit. Párrafos 160 al 172.

95. De entre los derechos que se conculcan, se resaltan el derecho a la vida, el derecho a su integridad personal (a no ser sometido a tortura o malos tratos), el derecho a la libertad y seguridad jurídica de las personas, el derecho al acceso a la justicia, la tutela judicial efectiva, el debido proceso, al derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, al libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la verdad, entre otros.

96. La Corte ha determinado que, la desaparición forzada, posee características únicas que deben ser tomadas en cuenta. La primera, como se dijo, es que se trata de una violación múltiple o compleja. La segunda que es un delito continuo, porque hasta en tanto no se sepa el paradero de la víctima, el delito mantiene sus efectos.[85] En este caso, los elementos concurrentes y constitutivos de la desaparición forzada de personas, se actualizaron. En primer lugar, la privación de la libertad, de que se dio cuenta en el apartado previo; se tuvo por cierto también que, en esta privación de la libertad, hubo la intervención directa de agentes estatales, concretamente de elementos de la Policía Estatal Preventiva, y finalmente, el informe de autoridad, así como las declaraciones de los oficiales participantes concretaron la negativa de reconocer la detención y de revelar la suerte o paradero de la persona sustraída.

97. No obstante que, el carácter de violación permanente[86], se desvaneció una vez hecho el reporte de hechos que dio inicio a otra Carpeta de Investigación, ahora por el delito de homicidio, en el que se dio cuenta de la aparición de un cuerpo sin vida en la comunidad de [...] Ojocaliente, Zacatecas, que tras los estudios y reconocimientos pertinentes, resultó ser el de quien respondiera a nombre de **A1†,** lo que no resta responsabilidad en los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que iniciaron con la privación ilegal de la libertad de éste.

98. En ese sentido la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que:

> "[e]l análisis de la desaparición forzada debe abarcar la totalidad del conjunto de los hechos que se presentan a consideración del Tribunal en el presente caso[87]. Sólo de este modo el análisis legal de la desaparición forzada es consecuente con la compleja violación a derechos humanos que ésta conlleva[88], con su carácter continuado o permanente y con la necesidad de considerar el contexto en que ocurrieron los hechos, a fin de analizar sus efectos prolongados en el tiempo y enfocar integralmente sus

---

[85] Véase, entre otras: Corte IDH. Caso Blake *vs* Guatemala. Excepciones preliminares. Sentencia del 2 de julio de 1996. Serie C Núm. 27, párr. 39; Caso Gómez Palomino *vs* Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 22 de noviembre de 2005. Serie C, núm. 136, párr. 92; Caso de las Hermanas Serrano Cruz *vs* El Salvador. Excepciones Preliminares. Sentencia del 23 de noviembre de 2004. Serie C Núm. 118, párr. 100 a 106; Caso Molina Theissen *vs* Guatemala. Reparaciones y Costas. Sentencia del 3 de julio de 2004. Serie C Núm. 108, párr. 41; Caso 19 Comerciantes *vs* Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 5 de julio de 2004. Serie C Núm. 109, párr. 142; Caso Goiburú y otros *vs* Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de septiembre de 2006. Serie C Núm. 153, párr. 82.

[86] Cfr. Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 1987-1988, Capítulo V.II. Este delito "es permanente por cuanto se consuma no en forma instantánea sino permanente y se prolonga durante todo el tiempo en que la persona permanece desaparecida" (OEA/CP-CAJP, Informe del Presidente del Grupo de Trabajo Encargado de Analizar el Proyecto de CIDFP, doc. OEA/Ser.G/CP/CAJP-925/93 rev.1, de 25.01.1994, p. 10).

[87] Cfr. Caso Heliodoro Portugal Vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 12 de agosto de 2008. Serie C No. 186, párr. 112, y Caso Ticona Estrada y otros Vs. Bolivia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 191, párr. 56, y Caso Anzualdo Castro Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de septiembre de 2009. Serie C No. 202, párr. 67.

[88] Cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, párr. 185; Caso Ticona Estrada y otros Vs. Bolivia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 191, párr. 70, y Caso Anzualdo Castro Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de septiembre de 2009. Serie C No. 202, párr. 67.

> consecuencias[89], teniendo en cuenta el *corpus juris* de protección tanto interamericano como internacional."[90]

99. De ahí la necesidad de hacer un análisis del contexto en que ocurrieron los hechos, y con ello de los efectos que se prolongan en el tiempo y sus consecuencias. Por lo carácter permanente de la desaparición forzada de personas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que, de acuerdo con el derecho positivo mexicano, la desaparición forzada de personas, es un delito de naturaleza permanente o continua, ya que si bien el ilícito se consuma cuando el sujeto activo priva de la libertad a una o más personas, con la autorización, apoyo o aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información sobre su paradero, dicha consumación sigue dándose y actualizándose que hace al hasta que aparecen los sujetos pasivos o se establece cuál fue su destino, y que el mismo está contemplado en el artículo II de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, (coincidente con lo previsto en los artículos 215-A del Código Penal Federal y 168 del Código Penal del Distrito Federal)[91].

100. La Declaración sobre la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas favorece la protección del derecho a no ser víctima de desaparición forzada o desaparición cometida por particulares y señala:

> "Artículo 4
> 1. Todo acto de desaparición forzada será considerado, de conformidad con el derecho penal, delito pasible de penas apropiadas que tengan en cuenta su extrema gravedad.
> 2. Las legislaciones nacionales podrán establecer circunstancias atenuantes para quienes, habiendo participado en actos que constituyan una desaparición forzada, contribuyan a la reaparición con vida de la víctima o de voluntariamente informaciones que permitan esclarecer casos de desaparición forzada."

101. Contempla también la obligación de los Estados parte, de armonizar el orden legal interno. Así el Estado Mexicano, publica en el Diario Oficial de la Federación, La Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, el 17 de noviembre de 2017, con entrada en vigor, sesenta días después y abroga la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas. Documento vigente al momento de acaecidos los hechos.

102. Por otro lado, la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares aplicable en todo el país por parte de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias, define los delitos de desaparición forzada de personas y de desaparición cometida por particulares, en los siguientes términos:

> "Artículo 27. Comete el delito de desaparición forzada de personas, el servidor público o el particular que, con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de un servidor público, prive de la libertad en cualquier forma a una persona, seguida de la abstención o negativa a reconocer dicha privación de la libertad o a proporcionar la información sobre la misma o su suerte, destino o paradero.

---

[89] Cfr. Caso Goiburú y otros Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de septiembre de 2006. Serie C No. 153, párr. 85, y Caso Anzualdo Castro Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de septiembre de 2009. Serie C No. 202, párr. 67.

[90] Cfr. Corte IDH, Caso Radilla Pacheco vs. Estados Unidos Mexicanos, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 23 de noviembre de 2009. Párrafo 146.

[91] Cfr. La Tesis: Jurisprudencia de la Novena Época. Registro: 181147. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XX, Julio de 2004 Materia(s): Penal Tesis: P./J. 48/2004 Página: 968, con el rubro: DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS. ESE DELITO ES DE NATURALEZA PERMANENTE O CONTINUA.

> Artículo 28. Al servidor público, o el particular que, con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de un servidor público, oculte o se niegue a proporcionar información sobre la privación de la libertad de una persona o sobre el paradero de una persona detenida, u oculte a una persona detenida en cualquier forma se le impondrá la pena prevista en el artículo 30.
>
> Artículo 29. Los superiores jerárquicos serán considerados autores del delito de desaparición forzada de personas en los términos de lo previsto en la legislación penal aplicable.
> […]
>
> Artículo 34. Incurre en el delito de desaparición cometida por particulares quien prive de la libertad a una persona con la finalidad de ocultar a la víctima o su suerte o paradero. A quien cometa este delito se le impondrá pena de veinticinco a cincuenta años de prisión y de cuatro mil a ocho mil días multa.

103. En mismo sentido, el Estado de Zacatecas, publica el 01 de febrero de 2020, la Ley en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares para el Estado de Zacatecas, que igualmente define a la desaparición forzada de personas, creada con cuatro objetivos específicos, con la aparición del cuerpo de **A1†**, hizo que, al menos en el ámbito de derecho penal se desvaneciera esta figura, de ahí que su análisis en la presente recomendación está contemplada como transitoria.

104. Como se dijo, el domicilio de **Q1**, fue allanado con violencia el día 05 de junio de 2018, por parte de elementos de la Policía Estatal Preventiva, por esos hechos, tanto la autoridad judicial, como este Organismo, arribaron a la firme convicción de que si se privó de la libertad a **A1†,** con la intención de causarle daño, lo que en materia penal actualizó la figura típica de secuestro, y en tratándose de violaciones a derechos humanos y ante la negativa de la autoridad a indicar el destino de la víctima actualiza la desaparición forzada de personas, que aún transitoria debe considerarse como pluriofensiva.

105. La desaparición forzada de personas, como se dijo, es una conducta pluriofensiva y continuada o permanente, cuya definición se tiene en el artículo III de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas[92], que concatenado a otros instrumentos internacionales que se hicieron notar en los párrafos que preceden y de los que se rescatan como elementos concurrentes y constitutivos de la desaparición forzada a los siguientes: a) La privación de la libertad; b) La intervención directa de agentes estatales o por la aquiescencia de éstos, y c) La negativa de reconocer la detención y de revelar la suerte o paradero de la persona interesada.

106. En cuanto a estas características propias del flagelo de la desaparición forzada de personas, se tiene que el análisis de la primera, es decir, de la privación de la libertad de **A1†**, se tiene por comprobada, pues tenemos por cierto que éste, fue privado ilegalmente de su libertad. En este apartado que antecede, se dio cuenta de este elemento constitutivo de desaparición forzada de personas, en su modalidad de violación a los derechos humanos de **A1†,** quien el día 05 de junio de 2018 fue privado de su libertad, aproximadamente a las 05:00 horas, mientras se encontraba en su domicilio, en compañía de varios miembros de su familia, lo que quedó suficientemente acreditado en el punto previo y colmado sus términos la violación al derecho a la libertad personal.

107. Ahora bien, en cuanto a la participación directa de elementos de la Policía Estatal Preventiva, se tiene también probado que fueron funcionarios adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública quienes perpetraron esta supresión de la libertad personal de **A1†.** Misma

[92] El Estado mexicano es parte desde el 9 de abril de 2002

convicción a la que arribó la autoridad jurisdiccional, es decir, el Tribunal de Enjuiciamiento que juzgó la causa penal […]. Por ello, por la participación en los hechos de elementos pertenecientes a una corporación policía estatal, es que se actualizaron condiciones que permitieron se calificara como agravada la conducta antijurídica, culpable y punible, lo anterior en atención al grupo de más de dos personas que lo perpetró, quienes además utilizaron la violencia, se introdujeron sin autorización en un inmueble habitado y, pertenecían a una institución de seguridad pública, concretamente a la Policía Estatal Preventiva.

108. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, sentenció al Estado Mexicano en matera de Desaparición Forzada de Personas, en caso Caso Radilla Pacheco, en cuya sentencia del 23 de noviembre de 2009, en la que sostuvo que, además del análisis de conjunto de los hechos que se presentan en cada caso de desaparición de personas, es imperativo realizar un análisis legal de la desaparición forzada, además de considerar el contexto en que ocurrieron los hechos, a fin de analizar sus efectos prolongados en el tiempo y enfocar integralmente sus consecuencias. En este caso, la desaparición de **A1†,** acaeció en un contexto de inseguridad percibida por los habitantes de la comunidad de Unión de San Antonio, de entre ellos, quienes fueron testigos en la audiencia de juicio, concretamente, la **C. T1**, señaló que de manera constante acudían patrullas de la Policía Estatal Preventiva y circulaban por la comunidad, lo que no generaba un ambiente de seguridad, sino que por el contrario de zozobra, ya que en 2018, mismos elementos de la Policía Estatal Preventiva había allanado también su domicilio en condiciones similares a las de los ahora quejosos[93].

109. Ahora bien, y analizando los hechos para determinar quiénes perpetraron los hechos violatorios de derechos humanos que se han evidenciado a lo largo del presente cuerpo recomendatorio, tenemos que, los elementos ocupantes de las patrullas 531, 537 y 571, los días 04 y 05 de junio de 2018, fueron los oficiales **CC. CRUZ MARTÍNEZ IRVIN ALEXIS, ZAPATA ROMÁN EFRÉN ALEJANDRO, GONZÁLEZ PALAFOX MIGUEL ÁNGEL, RAMOS NAVA ÁNGEL MANUEL, CASTELLANOS NAVARRETE JAVIER, RIVERA CUEVAS JORGE LUIS, ADAME ORTIZ MARTÍN DE JESÚS, MARTÍNEZ JUÁREZ HÉCTOR ADÁN, REYES GUERRERO VALERIA CONCEPCIÓN, MARTÍNEZ MARTÍNEZ ALONZO, FLORES CARREÓN RODRIGO, CUEVAS CARLÍN LUIS ANTONIO, PIÑÓN VILLANUEVA LUIS CARLOS, RAMÍREZ CALZADA JUAN MANUEL**, y **GARCÍA TREJO JUAN FERNANDO,** que aparecen en la fatiga de servicio citada y firmaron informe de estos hechos a su jefe inmediato, en donde demás aparece el nombre de **I2**, quien no aparece en la fatiga de servicio. Elementos que reconocieron haber patrullado la zona [...]gráfica en donde está enclavada la comunidad de Unión de San Antonio, además de pertenecer al grupo [...], por sus siglas, al Grupo Especial de Operaciones, tal y como se indicó en la fatiga de servicio de ese día.

110. El motivo de que no aparece en la fatiga de servicio **I2** lo esclareció él mismo, quien ante personal de este Organismo indicó que él no aparece en las fatigas de servicio por ser una orden que él recibió desde que se desempeña en la Policía Estatal Preventiva, ya que dijo depender y reportar sus actividades directamente el Secretario y Subsecretario de Seguridad Pública a quienes identificó por sus apellidos paternos, **CAMBEROS** y **CANO**, respectivamente. Agregó que su trabajo era adiestrar elementos, y que previamente había conformado un grupo identificado como GATPE, es decir, Grupo Aeromóvil Táctico de la Policía Estatal. Al momento de declarar dijo que estaba capacitando al grupo [...], que es Grupo Especial de Operaciones, al que le faltaban 4 o 5 meses, y ya se encontraba en trabajo o adiestramiento de campo.

111. A esta Comisión de Derechos Humanos, se le informó por conducto del **INSPECTOR GENERAL, ISAÍAS HERNÁNDEZ LANDEROS,** entonces Director de la Policía Estatal

---

[93] Por estos hechos se el inicio expediente de queja CDHEZ/039/2018, en favor de ellas y de las personas que conforman su familia, quienes se quejaron de afectación a su vida privada, familia y domicilio.

Preventiva, que el grupo [...], tiene a su servicio tres unidades adicionales a las patrullas que se pueden asignar y son las siguientes: una camioneta Dodge Ram 2500, modelo 2009, con placas de circulación ZG1339A color blanco; una Dodge Ram 2500, modelo 2012, placas de circulación ZG1305A color blanco; y una Chevrolet Suburban modelo 2008, con placas de circulación ZGE415B, mismas que a la fecha de presentación de informe se encontraban a disposición de la autoridad investigadora.

112. Así las cosas, y una vez que la Unidad Especial de Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, tomó conocimiento de los hechos denunciados, en donde las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos narraron los hechos y cómo fueron algunos miembros de su familia amordazados y atados con cinta gris. Estas imputación se evidencia como verídica con la Inspección del lugar del hecho, realizada por elementos de la Policía de Investigación, quienes se encontraron el daño en vidrios y el desorden generalizado del lugar que acreditó la violencia en la intromisión al domicilio, y también se encontraron restos de cita adherible de color gris, por la presencia de este material y el resto de evidencia es que la Fiscalía solicitó entre, otras diligencias, de investigación el aseguramiento de los vehículos pertenecientes al grupo [...] de la Policía Estatal Preventiva, además de la patrulla 571, ya que los testigos de los hechos denunciaron específicamente a la patrulla 571, además de haber visto una unidad doble cabina blanca y un vehículo cerrado, tipo camioneta.

113. El aseguramiento de los vehículos solicitados, permitió que se realizara inspección de las unidades, a cargo del grupo [...] y de entre estas, en la camioneta Ram, Blanca, 2015, en la que se encontraron, olvidadas a un lado de donde se ubicaba, restos de cinta gris, es decir, del mismo material adhesivo que las víctimas de los hechos dijeron se utilizó para restringirles el movimiento y que el personal médico del Hospital de Cuauhtémoc, Zacatecas, aseguró que traía la persona lesionada que solicitó atención médica de urgencias. En este momento es preciso adelantar también el destino que tuvo **A1†,** quien posteriormente a que fue sustraído de su domicilio con violencia arribó por sus propios medios al Hospital de Cuauhtémoc, Zacatecas, en donde además de lucir lesionado, presentaba ataduras y restos de cinta gris, de similar composición a la encontrada en la casa habitación de las víctimas y en la unidad motriz asignada al Grupo Especial de Operaciones de la Policía Estatal Preventiva.

114. En relación con el uso de cinta gris para atar a las víctimas, tenemos por cierto su uso, con la concatenación de las investigaciones de campo que realizó la Policía de Investigación, quienes encontraron este material en la casa de las víctimas, en el hospital en donde fue atendido **A1†** y, a un costado de la camioneta Ram Blanca, destinada al servicio del grupo [...]. Lo que da certeza a la imputación de las víctimas. De estos restos de cinta adhesiva se solicitó si en los mismos había evidencia lofoscopia que recabar, los que, en su mayoría no resultaron aptos para confronta, solo aquellos que se encontraron en el domicilio de las víctimas.

115. Adicionalmente se requirió un dictamen pericial de campo, en el que se analizaran el total de restos de cinta adhesiva, y se pidió determinar si las cintas adhesivas encontradas en el Instituto de Formación Profesional al costado de un vehículo Ram Blanco, Pick up, y dos fragmentos levantados del Centro de Salud de Cuauhtémoc, Zacatecas, son similares en características y en patrón de corte, dictamen realizado el 13 de junio de 2018, el que reportó que sí existe similitud con las características de las cintas adhesivas analizadas, es decir, que es el mismo tipo de material, el que si bien no coincide en su ancho y cortes, hace concluir que los encontrados a un lado de la camioneta y en el hospital de Cuauhtémoc, Zacatecas no fueron cortados de la misma unidad de manera inmediata, más acredita fehacientemente su uso por parte de los elementos de la Policía Estatal Preventiva, restos que al ser de diferentes anchos, denota que de manera reiterada se hace uso de este material, y con ello se tiene por cierto que ellos fueron quienes sustrajeron de su domicilio a **A1†.**

116. Así las cosas, y en atención al estándar probatorio que se solicita en materia de las graves violaciones a derechos humanos que nos ocupan, bastan los indicios antes citados para tener por cierto que el entonces llamado Grupo Especial de Operaciones, a través de los elementos de la patrulla 571, comandados por **I2**, quien además no dejaba registro de sus actividades, pues reportaba las mismas solo a los entonces Secretario y Subsecretario de Seguridad Pública, perpetraron con su conducta violaciones graves a los derechos humanos de **A1†**, como lo es la desaparición forzada transitoria de personas.

117. Entre los factores de la desaparición de personas, es importante señalar el contexto de la misma, y en el caso que nos ocupa tenemos por cierto que, **A1†,** fue desaparecido en un contexto de total impunidad a las acciones que dirigía **I2**, tolerado por las autoridades estatales en materia de Seguridad Pública, pues éste pese a las prácticas al margen de la legalidad que aquí se han esclarecido tenía la confianza de sus superiores, para no reportar en las fatigas su salida y actividad de campo, así como tampoco dejar registro de las mismas, ya que como él mismo lo indicó, solo reportaba sus actividades al Secretario y Subsecretario de Seguridad Pública, quienes al no tener un registro de sus actividades, toleraban éstas del índole que fueran así como sus métodos al margen de la legalidad. Por ello, el contexto social de los hechos, indicó que en los habitantes de la comunidad de Unión de San Antonio, Pánfilo Natera, Zacatecas, la presencia de los elementos de la Policía Estatal Preventiva generaba zozobra y una sensación real y potencial de inseguridad, la que por sus características tiene además efectos prolongados en quien la sufre. Esto es así, pues vecinos del lugar, reconocieron ante personal de este Organismo que, después de los hechos, se dejó de patrullar el lugar y, concluyeron que, ya sin la presencia de los elementos de la Policía Estatal Preventiva, el poblado estaba más tranquilo.

118. Las consecuencias de los hechos de desaparición forzada de personas genera, además, consecuencias múltiples, en primer lugar, la afectación de la estructura familiar de la señora **[…]**, quien no solo perdió un miembro de ésta, concretamente **A1†**, quien apareciera sin vida en horas posteriores a que fuera sustraído de su domicilio. En segundo lugar, se vieron en riesgo a su integridad personal y vida, por ello fueron sujetos a medidas de protección por parte del estado, concretamente por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado, quien declaró la calidad de víctimas a los **CC. A2, A3, A4, Q1, A6** y **A5**, y dictó en su favor medidas de protección. En tercer lugar, esta serie de afectación hizo que los señores **[…]** y **[…]**, perdieran la vecindad, tal y como lo reportaron los vecinos del lugar, quienes se limitaron a indicar que después del sepelio de **A1†,** vieron como la familia se mudó de residencia desconociendo su paradero.

119. Esta Comisión de Derechos Humanos, tuvo conocimiento por lo informado por la **M. EN C. MARTHA BERENICE VÁZQUEZ GONZÁLEZ,** Fiscal Especializado de Derechos Humanos, Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, de la Fiscalía General de Justicia del Estado, quien indicó que las acciones relativas a la protección de la familia **[…],** consistieron en facilitarle los medios económicos para que fueran reubicados en diversa entidad de la república. En mismo sentido, la propia **T1**, manifestó ante personal de este Organismo, mediante comparecencia del 14 de septiembre de 2018, que cuando se encontraban en el Estado, se les asigna un elemento de la Policía para su protección. Con lo que se tiene por cierto, que las acciones lesivas a que nos hemos referido, has trascendido en la esfera jurídica y personal de las víctimas, los que les hicieron incluso perder la vecindad, dejando así en evidencia la gravedad contextual de la inseguridad percibida por los pobladores de Unión de San Antonio.

120. Así las cosas, y acreditadas las violaciones a los derechos humanos que sufrió **A1†**, y su innegable afectación pluriofensiva, atribuible a elementos de la Policía Estatal Preventiva, quienes ingresaron con violencia a su domicilio, en perjuicio a su derecho a la inviolabilidad del mismo y a la vida privada; lo privaron ilegal y arbitrariamente de su libertad, y fueron parte de su desaparición forzada transitoria, pues se negaron a reconocer la detención y privación de la libertad y, la suerte o paradero la persona, resta analizar cómo se dio con el

paradero de **A1†,** y con ello tener por acreditada su afectación al derecho a la integridad física y a la vida misma, como en el apartado siguiente se realizará.

IV. Derecho a la integridad y seguridad personal, en relación con el derecho a la integridad física y a la vida, en relación con la desaparición forzada de personas.

121. En materia de derechos humanos, no podemos olvidar que con motivo de la desaparición de personas se conculcan otros derechos, entre ellos también el derecho a la libertad personal y el derecho a la seguridad jurídica de las personas, el derecho al acceso a la justicia, la tutela judicial efectiva, el debido proceso, al derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, y se conlleva también con la posibilidad de violentar el derecho a la integridad personal y a la vida.

122. En cuanto al carácter pluriofensivo de la desaparición forzada de personas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha declarado que, para entender el fenómeno se requiere de un análisis sistémico y comprensivo, sustentado en la necesidad de una perspectiva integral de la desaparición forzada, en razón a la pluralidad de conductas que, cohesionadas por un único fin, vulneran de manera permanente bienes jurídicos protegidos por la Convención[94]. Así, en diversos casos que se sujetaron a su jurisdicción ha sostenido que la desaparición forzada es una violación múltiple de derechos humanos y los deberes de respeto y garantía[95]. Al respecto la Corte Interamericana ha señalado que con la desaparición forzada de personas se violentan los siguientes derechos: derecho a la libertad personal, derecho a la integridad personal, derecho a la vida, (en su caso) y al derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica[96], así como el derecho a la integridad personal de los familiares o víctimas indirectas[97].

123. De entre los derechos que se conculcan, se resaltan el derecho a la vida, el derecho a su integridad personal (a no ser sometido a tortura o malos tratos), el derecho a la libertad y seguridad jurídica de las personas, el derecho al acceso a la justicia, la tutela judicial efectiva, el debido proceso, al derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, al libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la verdad, entre otros.

a) Derecho a la integridad personal y a la vida.

124. En cuanto al alcance pluriofensivo de la desaparición de una persona, en el que es posible su afectación en la integridad personal de las víctimas, al respecto, tenemos que el derecho a la integridad personal, es aquél que tiene toda persona para no ser objeto de vulneraciones, sea física, fisiológica o psicológica, o cualquier otra alteración en el organismo que deje huella temporal o permanente, que cause dolor o sufrimiento graves con motivo de la injerencia o actividad dolosa o culposa de un tercero.

125. Su tutela convencional se encuentra regulada a nivel internacional en los en los artículos 3 y 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos en los que expresamente se indica que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona y que nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Así como en los numerales 7 y 10.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en los principios 1 y 6 del “Conjunto de principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión”, de las Naciones Unidas, documentos que coinciden en que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física y a no ser sometidos a tortura ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes con motivo de

---

[94] Ídem. Párrafo. 138

[95] Cfr. Cfr. Caso de las Hermanas Serrano Cruz Vs. El Salvador. Excepciones Preliminares. Sentencia de 23 de noviembre de 2004. Serie C No. 118, párrs. 100 a 106; Caso Heliodoro Portugal Vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 12 de agosto de 2008. Serie C No. 186, párr. 118, y Caso Anzualdo Castro Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de septiembre de 2009. Serie C No. 202, párr. 59.

[96] Cfr. Caso Radilla Pacheco vs Estados Unidos Mexicanos. Sentencia de 23 de noviembre de 2009 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas) párrafos. 147 al 159.

[97] Óp. Cit. Párrafos 160 al 172.

la privación de su libertad. Asimismo, como en los ordinales 1, 2 y 16.1 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes de las Naciones Unidas; 1, 2, 3, 4, 6 y 8 de la Declaración sobre la Protección de todas las Personas contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, de las Naciones Unidas.

126. En el orden regional de protección de derechos humanos, tenemos la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre que en sus cardinales I y XXV, proscriben todo maltratamiento físico. Así como en los artículos 5.1 y 5.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos y en los numerales 1 al 4, 6 al 8 y 12 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, que prevén la obligación del Estado de impedir todo acto por el cual se inflija intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, lo que conlleva a la protección de la dignidad, la integridad física y psicológica de la persona.

127. Así, la protección de este derecho, a través de la prohibición absoluta de la tortura física y psicológica, ha alcanzado el status del "*ius cogens*" (derecho imperativo, perentorio o que obliga) internacional[98], conformando jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CrIDH) y de otros tribunales internacionales de derechos humanos.

128. El Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, en la Observación General 20, estableció en el párrafo 102 que: *"toda persona privada de la libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano"* en virtud que *"La violación a estos derechos, a través de las retenciones ilegales, sitúa en inminente riesgo el derecho a la integridad personal del detenido, pues es precisamente durante este tiempo cuando frecuentemente se realizan actos de tortura y tratos crueles e inhumanos por parte de los elementos aprehensores".*

129. Lo anterior se traduce en que todas las personas tienen derecho a que sea protegida su integridad física, psicológica y moral, y la normatividad citada no admite que este derecho se vea disminuido o eliminado. Más aún, cuando estas personas se encuentran bajo la protección del Estado, que actúa como garante de quienes por cualquier situación están privadas de la libertad.[99]

130. El derecho a la integridad de las personas se encuentra prevista en el orden jurídico interno, concretamente en los artículos 1º, 16, párrafo primero, 19, último párrafo y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el primer precepto, se establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales de derechos humanos en los que el Estado Mexicano sea parte, y en los siguientes preceptos queda previsto el derecho de toda persona privada de su libertad a ser tratada humanamente y con el debido respeto a la dignidad inherente al ser humano, lo cual incluye el deber de los servidores públicos de salvaguardar su integridad personal.[100]

131. Adicionalmente, el artículo 29, párrafo segundo de la Constitución Federal, establece que "(…) no podrá restringirse ni suspenderse el ejercicio de los derechos (…) al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, (…) la prohibición de la desaparición forzada y la tortura (…)."

132. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, fijó en la tesis constitucional: "Derechos a la integridad personal y al trato digno de los detenidos. Están tutelados constitucional y

---

[98]CrIDH, "Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri vs. Perú", sentencia del 8 de julio de 2004, Fondo, Reparaciones y Costas, párrafos 111 y 112.
[99]CNDH. Recomendaciones 69/2016, párrafo 138; 74/2017, párrafo 118; 48/2018, párrafo 87; 74/2018, párrafo 174; 79/2018, párrafo 50; 80/2018, párrafo 43; 7/2019, párrafo 111, entre otras.
[100]CNDH. Recomendaciones 7/2019, párrafo 104; 80/2018, párrafo 35; 79/2018, párrafo 43; 74/2018, párrafo 164; 67/2018, párrafo 162; 69/2016 del 28 de diciembre de 2016, párrafo 135; 71/2016 del 30 de diciembre de 2016, párrafo 111; y 21/2017, de 30 de mayo de 2017, párrafo 75, entre otras.

convencionalmente y son exigibles independientemente de las causas que hayan motivado la privación de la libertad:

> **"DERECHOS A LA INTEGRIDAD PERSONAL Y AL TRATO DIGNO DE LOS DETENIDOS. ESTÁN TUTELADOS CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONALMENTE Y SON EXIGIBLES INDEPENDIENTEMENTE DE LAS CAUSAS QUE HAYAN MOTIVADO LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD.**
> **La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos** establece en sus artículos 18, 19 y 20, apartado A, el **derecho de los detenidos a ser tratados con dignidad**. Estos preceptos reconocen diversos derechos de las personas detenidas y el trato al que tienen derecho mientras se encuentran privados de su libertad, como son el lugar donde se encontrará la prisión preventiva, el plazo máximo de detención ante autoridad judicial, la presunción de inocencia, la **prohibición de ser** incomunicados, **torturados** o intimidados, así como sus prerrogativas durante el proceso. Por otra parte, ha sido expresamente previsto en los artículos 5.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 10.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos el derecho a la integridad personal, así como el derecho a que toda persona privada de su libertad sea tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. Por tanto, **estos derechos que asisten a los detenidos deben respetarse independientemente de las conductas que hayan motivado la privación de la libertad**, así sea que puedan ser objeto de variadas y limitadas modulaciones en específicas circunstancias, **de modo que su inobservancia es violatoria de derechos humanos**."[101]

133. Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha sostenido en la Recomendación General 10, "Sobre la práctica de la tortura", de 17 de noviembre del 2005, que "(…) una persona detenida se encuentra en una situación de especial vulnerabilidad, en razón de que surge un riesgo fundado de que se violen sus Derechos Humanos, tales como el derecho a la integridad física, a la presunción de inocencia y al trato digno; por ello, se ha observado que una vez que el sujeto es privado de su libertad y no es puesto de manera inmediata a disposición de la autoridad competente, se presentan las condiciones que propician la tortura, y es el momento en que se suelen infligir sufrimientos físicos o psicológicos a los detenidos, o bien, a realizar en ellos actos de intimidación, con la finalidad de que acepten haber participado en la comisión de algún ilícito, así como para obtener información, como castigo o con cualquier otro fin ilícito (…)".[102]

134. Ahora bien, el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantiza el reconocimiento de los derechos humanos establecidos en la propia norma fundamental y en los tratados internacionales en los que México sea parte, decretando que siempre se buscará la protección que más favorezca a la persona [principio pro persona]. De igual manera, establece la obligación de proteger y garantizar los derechos humanos de los que gozan todas las personas que se encuentran en territorio nacional, entre ellos los inherentes a la dignidad de los seres humanos, como es la integridad personal, esto es, la prohibición de todo acto y trato que atente contra la dignidad de la persona humana.

135. Por tal motivo, este Organismo realiza el presente pronunciamiento, cuyo estudio de los hechos cometidos en la persona de **A1†,** quien como se sabe el día 05 de junio de 2018, fue sustraído de su domicilio por elementos de la Policía Estatal Preventiva, quienes ingresaron al domicilio en que éste vivía, golpearon y amordazaron a algunos miembros de la familia y a **A1†,** a quienes les colocaron cinta gris para sujetarlos e impedirles el habla.

136. Del análisis de las evidencias que obran en autos, se tiene por inconcuso que los elementos de la Policía Estatal Preventiva que conformaban el Grupo Especial de Operaciones, sustrajeron de su domicilio a **A1†.** Por mismos hechos, el Tribunal de

---

[101] Pleno, Semanario Judicial de la Federación, enero de 2011, registro 163167.
[102] CNDH. Observaciones, inciso A, página 10.

Enjuiciamiento condenó, en calidad de coactor del delito de secuestro, a una de las personas que participaron en estos hechos, concretamente a **I1,** uno de los ocupantes de la unidad radio patrulla señalada con el número 571. El secuestro es un delito previsto y sancionado en la Ley General para Prevenir y Sancionar el Delito de Secuestro, al considerar colmados los extremos del su artículo 9º fracción I, inciso c), es decir, para causar daño o perjuicio a la persona privada de la libertad o a terceros. En este caso el daño se causó a **A1†**.

137. En este apartado se analiza la afectación a la integridad personal y vida de **A1†,** quien, por dicho de sus familiares, fue atado, amordazada y golpeado en su propio domicilio y posteriormente sustraído del mismo. Posterior a ello, a unas horas de su detención, aproximadamente a las 9:00 horas, acudió aún atado y amordazada al Hospital de Cuauhtémoc, Zacatecas, en donde solicita atención médica de urgencia, luce herido y maniatado, es decir, se le había causado un daño en su integridad física. En este sentido, personal de este Organismo se entrevistó con personal médico del citado nosocomio quienes refirieron los hechos de que se percataron. La **DRA. DR1,** dio cuenta de que el 05 de junio de 2018, aproximadamente a las 09:10 de la mañana, mientras daba consulta externa, se percató que entró un joven de 17 o 18 años, aproximadamente, que cuál solicitaba auxilio, estaba atado de las las manos (echas éstas hacía atrás y unidas con cinta), y en la boca tenía una mordaza de tela. En relación a su integridad, dijo que lo vio muy golpeado de la cabeza, sin playera, descalzo y con pantalón de mezclilla, lo pasaron al área de hospitalización y, el director del hospital, dio aviso de hechos al servicio de emergencias 911 y a la jurisdicción sanitaria a que está adscrito ese hospital.

138. Se entrevistó también a la **DRA. DR5,** médica odontóloga, quien indicó que el día 05 de junio de 2018, siendo aproximadamente las 9:15 de la mañana, estaba dando consulta, cuando se percató que entró al hospital un muchacho; el cual iba en malas condiciones por presentar varios golpes en su cuerpo. Así como la entrevista con la **ENFERMERA E1,** quien refirió igualmente que, el 05 de junio de 2018, aproximadamente las 9:10 horas entró al hospital un joven solicitando auxilio debido que iba todo golpeado, sucio, mal oliente, no traía playera, iba descalzo, traía pantalón de mezclilla, amordazado de la boca con un pedazo de tela y con las manos hacía atrás, amarradas con un pedazo de cinta; recuerda que ese muchacho le dijo que había sido secuestrado y por eso solicitaba auxilio, ella se encargó de quitarle al joven la tela que cubría su boca, así como la cinta que ataba sus manos, y le brindó la atención medica indicada, ya que le canalizó una solución intravenosa conocida como suero.

139. Todos los entrevistados dieron cuenta también, cómo esta persona fue sustraída del hospital por parte de personas armadas que ingresaron al mismo, rompiendo la reja de entrada con un vehículo de motor. Rescatándose de su dicho, la condición y el estado físico en que se encontraba, es decir, lesionado y sangrando de la cabeza. Lo que al acreditarse plenamente hizo convicción en el Tribunal de Enjuiciamiento y en este Organismo, que el motivo de la privación de la liberta de **A1†,** a cargo de los elementos de la Policía Estatal Preventiva, fue para hacerle daño, lo que configuró el delito de secuestro y, en materia de derechos humanos, la violación al derecho la integridad y seguridad personal, en relación con el derecho a la integridad física y, como se verá a continuación también en perjuicio del derecho a la vida.

140. Como se sabe, el cúmulo de violaciones a Derechos Humanos que se analizan a lo largo del presente cuerpo recomendatorio son imputables a los integrantes del denominado Grupo Especial de Operaciones, de la Policía Estatal Preventiva, mismo que contaba con el servicio de unidades radio patrullas que le fueran asignadas y otros vehículos sin señalética policial, entre ellos: una camioneta Dodge Ram 2500, blanca, 2009, placas ZG1339A; una camioneta Dodge Ram 2500, 2012, blanca, placas ZG1305A, y, un vehículo Chevrolet Suburban, 2008, placas ZGE415B, mismas que se ordenó su aseguramiento por parte de la autoridad investigadora.

141. De entre ellos, en el que corresponde a la unidad motriz Dodge Ram 2500, blanca, 2009, placas ZG-1339-A; fueron encontrados a un costado de la misma elementos lafoscopicos, consistentes en cita gris, como la encontrada en el domicilio de las víctimas y que éstas indicaron se utilizó para atar las manos de **A1†,** así como de algunos otros miembros de la familia. Material encontrado también en el Hospital de Cuauhtémoc, Zacatecas y que el personal médico dijo que retiró de las manos de una persona lesionada, atada y amordazada que llegó a solicitar atención de urgencia, la que fuera sustraída de ese lugar, una vez más con violencia, ahora por personas vestidas de particulares, quienes llegaron a bordo de una unidad motriz, mismas que si bien no fueron útiles para confronta, crean total certeza al dicho de las víctimas fueron tratadas con violencia de ello da cuenta el propio **A3**, hermano de **A1†** quien indicó como le ataron y golpearon y también como ataron y golpearon a su hermano **A1†,** a quien, una vez maniatado se llevaron de su domicilio.

142. Lo anterior da cuenta de las lesiones que infringieron en **A1†** quien posterior a que fue sustraído del nosocomio de Cuauhtémoc, Zacatecas fue encontrado sin vida en la carretera que conduce de la Ciudad de Ojocaliente a la comunidad de [...], el que presentaba en su integridad las siguientes lesiones:

1. Zona equimótica escoriativa de veintiséis por treinta y cuatro centímetros (26 x 34 cm) situada en toda la región facial, a ambos lados de la línea media anterior.
2. Zona escoriativa apergaminada diseminada de sesenta por sesenta y cinco (60 x 65 cm), situada en caras laterales y anterior del tórax y abdomen, a ambos lados de la línea media anterior.
3. Zona escoriativa diseminada de sesenta por veinticinco centímetros (60 x 25 cm), situada en todas las caras y tercios del brazo, codo y antebrazo derecho.
4. Zona escoriativa diseminada de cincuenta por veinticinco centímetros (50 x 25 cm), situada en todas las caras y tercios del brazo, codo y antebrazo izquierdo.
5. Fractura cerrada de humero izquierdo en su tercio proximal.
6. Zona escoriativa diseminada de ochenta y siete por treinta y ocho centímetros (87 x 38 cm), situada en todas las caras y tercios de muslo, rodilla y pierna derecha.
7. Zona escoriativa diseminada de ochenta y tres por treinta y ocho centímetros (83 x 38 cm), situadas en todas las caras y tercios de muslo, rodilla y pierna izquierda.
8. Zona escoriativa apergaminada diseminada de cincuenta por cincuenta y tres centímetros (50 x 53 cm) situada en cara posterior de tórax y abdomen, a ambos lados de la línea media posterior.
9. Zona escoriativa apergaminada diseminada de treinta por cuarenta centímetros (30 x 40 cm), situada en todos los cuadrantes de glúteos.

143. Lesiones que se diseminaron por todo su cuerpo, ya que presentada en la cara o región facial, en ambas caras laterales y anterior del tórax, ambos lados del abdomen, en brazo, codo y antebrazo derecho, en todas las caras y tercios del brazo, codo y antebrazo izquierdo, humero izquierdo fracturado en su tercio proximal, lesiones en todas las caras y tercios de muslo, rodilla y pierna derecha, en todas las caras y tercios de muslo, rodilla y pierna izquierda, en todos los cuadrantes de glúteos. Con lo que se acreditó que el motivo de sustraer a **A1†** de su domicilio fue para hacerle daño, el que se tiene por cierto con la evidencia expuesta en el presente apartado.

144. Lamentablemente, **A1†** fue víctima de desaparición forzada y por la condición pluriofensiva de esta grave violación a derechos humanos, actualizó la posibilidad de afectación de otros derechos, transitando a violación al **derecho a la vida**, cuyo goce pleno es un “prerrequisito para el disfrute de todos los demás derechos humanos. De no ser

respetado, todos los derechos carecen de sentido.” [103] La Declaración Universal de Derechos Humanos, consagra el derecho a la vida en los artículos 1°, 2.1 y 3° en los términos siguientes:

> Artículo 1.
> “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”.
>
> Artículo 2.
> 1. “Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición”.
>
> Artículo 3
> “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.”

145. El derecho a la vida, y su lugar dentro de una concepción sistemática de los derechos humanos es un derecho lo encontramos como inherente al ser humano por el simple hecho de serlo. Como derecho mismo, el derecho a la vida, tiene la estructura de los derechos subjetivos, es decir, supone una relación de bilateralidad, en primer lugar, la titularidad del derecho recaer en todas las personas de la familia humana, frente a la obligación también de toda la familia humana de respetar o cumplir con el deber correlativo del derecho a la vida y, por lo que hace al estado, también deberá de obrar de tal modo que; respete la vida, y permita que se respete, es decir, debe contar con un fundamento jurídico que le de forma. Este derecho, constituye una conducta de respeto y compromiso para con la vida humana, propia o ajena, y que al derivar de la dignidad intrínseca de la persona humana es anterior y superior a las legislaciones escritas y a los acuerdos entre gobiernos, de modo que su reconocimiento tiene simplemente efectos declarativos, aunque la obligación que del tema deriva tiene efectos constitutivos en el sentido de que los Estados tendrán que adoptar las medidas necesarias a fin de que sea respetado y garantizado.[104]

146. En cuanto al derecho a la vida, Massini, señala que éste “tiene su fundamento o justificación racional en la inminente dignidad de la persona humana y su contenido o materia está dado por el respeto al bien básico de la vida en cuanto modo propio de la existencia de los entes humanos, en otras palabras, la prestación que corresponde a este derecho consiste en una conducta: acción u omisión, de respeto y salvaguarda al bien básico de la vida.”[105]

147. En el marco internacional de protección de los Derechos Humanos, encontramos que el derecho a la vida, constituye un derecho básico y primario del que goza toda persona desde su existencia. En ese sentido, el artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, señala que, “[t]odo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”.[106] Asimismo, el artículo 6.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos señala que, “[e]l derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente.”[107]

---

[103] CoIDH, “Caso Baldeón García vs Perú.” Sentencia de 6 de abril de 2006, párrafo 83.
[104] Suprema Corte de Justicia de la Nación. Serie de Derechos Humanos. Dignidad Humana, derecho a la vida y derecho a la integridad personas. P. 11. Salado Osuna, Ana. La pena de muerte en derecho internacional; Una excepción del derecho a la vida. España. Tecnos. 1999. P. 17.
[105] Ibidem. Massini C.I, “El Derecho a la vida en la sistemática de los Derechos Humanos. MASSINI C.I. y Serna, P. (eds) rescatado de, https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/12/5642/11.pdf
[106] Declaración Universal de Derechos Humanos, recatada de http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/, fecha de consulta 05 de octubre de 2020.
[107] Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/ccpr.aspx, fecha de consulta 05 de octubre de 2020.

148. Por lo que hace a la protección regional de los derechos humanos, se contempla en el artículo 1 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, así como en los numerales 1.1 y 4.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establecen, respectivamente, que indican; "[l]os Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna […]".[108] Por lo que, "[t]oda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente."[109]

149. Por su parte, el Estado Mexicano, por conducto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que: "El derecho a la vida impone al Estado una obligación compleja, en tanto que no sólo prohíbe la privación de la vida [que se traduce en una obligación negativa, que no se prive de la vida], sino que también exige que, a la luz de la obligación de garantizar el pleno, libre y efectivo ejercicio de los derechos humanos, adopte medidas positivas para preservar ese derecho en el ámbito legislativo, judicial y administrativo […]".[110]

150. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el "Caso de las Masacres de Ituango Vs. Colombia", sostuvo respecto del derecho a la protección a la vida que: "[…] los Estados tienen la obligación de garantizar la creación de las condiciones necesarias para que no se produzcan violaciones de ese derecho inalienable, así como el deber de impedir que sus agentes o particulares, atenten contra el mismo".[111] También, puntualizó que, "el cumplimiento de las obligaciones impuestas por el artículo 4 de la Convención Americana, relacionado con el artículo 1.1 de la misma, no sólo presupone que ninguna persona sea privada de su vida arbitrariamente (obligación negativa), sino que además requiere, a la luz de su obligación de garantizar el pleno y libre ejercicio de los derechos humanos, que los Estados adopten todas las medidas apropiadas para proteger y preservar el derecho a la vida (obligación positiva) de quienes se encuentren bajo su jurisdicción".[112]

151. Asimismo, indicó que, "[e]sta protección activa del derecho a la vida por parte del Estado no sólo involucra a sus legisladores, sino a toda institución estatal y a quienes deben resguardar la seguridad, sean éstas sus fuerzas de policía o sus fuerzas armadas. En razón de lo anterior, los Estados deben adoptar las medidas necesarias, no sólo a nivel legislativo, administrativo y judicial, mediante la emisión de normas penales y el establecimiento de un sistema de justicia para prevenir, suprimir y castigar la privación de la vida como consecuencia de actos criminales, sino también para prevenir y proteger a los individuos de actos criminales de otros individuos e investigar efectivamente estas situaciones."[113] También, en el "Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa vs. Paraguay", la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estableció que, "[e]l derecho a la vida es un derecho humano fundamental, cuyo goce pleno es un prerrequisito para el disfrute de todos los demás derechos humanos. De no ser respetado, todos los derechos carecen de sentido."[114]

152. En la sentencia emitida por Corte Interamericana de Derechos Humanos (CrIDH) en el "Caso Vargas Areco Vs Paraguay", se puntualizó que: "[…] la obligación de garantizar el derecho reconocido en el artículo 4 de la Convención (Americana sobre Derechos Humanos,

---

[108] Convención Americana sobre Derechos Humanos, https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm, fecha de consulta 05 de noviembre de 2020.
[109] Ídem.
[110] Derecho a la vida. Supuesto en que se actualiza su transgresión por parte del Estado". Semanario Judicial de la Federación, enero de 2011, registro 163169.
[111] CrIDH, "Caso de las Masacres de Ituango Vs. Colombia", Sentencia de 1 de julio de 2006, párr. 130.
[111] Ídem, párr. 129.
[112] Ídem, párr. 130.
[113] Ídem, párr. 131.
[114] CrIDH, "Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay, Sentencia de 29 de marzo de 2006 (Fondo, Reparaciones y Costas), párr. 150.

[…] no sólo presupone que ninguna persona sea privada de su vida arbitrariamente [obligación negativa], sino que además requiere a la luz de su obligación de garantizar el pleno y libre ejercicio de los derechos humanos, que los Estados adopten todas las medidas apropiadas para proteger y preservar el derecho a la vida [obligación positiva] de quienes se encuentren bajo su jurisdicción. Esta protección activa del derecho a la vida por parte del Estado no sólo involucra a sus legisladores, sino a toda institución estatal y a quienes deben resguardar la seguridad, sean éstas sus fuerzas de policía o sus fuerzas armadas".[115]

153. En el caso que nos ocupa, **A1†**, perdió la vida tras la intervención lesiva de la autoridad estatal, por conducto de integrantes del grupo [...] la Policía Estatal Preventiva, quienes violentamente y al margen de toda legalidad incurren en su vida privada, ingresando a su domicilio, ataron y lesionaron a varios miembros de su familia y a él le privaran arbitraria e ilegalmente de su libertad con miras a hacerle daño. Daño que concluyó con su pérdida de vida, misma que si bien pudiera no imputarse de forma directa a los elementos de la Policía Estatal Preventiva, quienes, para el horario de aparición de **A1†**, pidiendo auxilio médico o el reporte posterior del hallazgo de un cuerpo sin vida, los efectivos del Grupo Especial de Operaciones habían concluido ya sus funciones, incluso su líder dijo se encontraba impartiendo cátedra en una universidad privada.

154. No obstante, tampoco es posible tener por aislados estos hechos, en primer lugar, porque no hay lugar a dudas que fueron miembros del Grupo Especial de Operaciones de la Policía Estatal Preventiva, quienes consumaron la violación a la vida privada, al ingresar violentamente en el domicilio de las víctimas, también fueron quienes violentaron su derecho a la libertad personal, e iniciaron con la afectación a su integridad. De ahí que, el hecho de que haya llegado a requerir de auxilio médico a un nosocomio de las cercanías a donde fue privado de su libertad, y de este lugar también sustraído con violencia por terceras personas, para aparecer ultimado por proyectiles de arma de fuego, no quita responsabilidad a quienes desde el estado, concretamente como parte de la Seguridad Pública, como lo son elementos de la Policía Estatal Preventiva, participaron en estos hechos lesivos de los derechos humanos, y además permitieron la participación en estos hechos de terceras personas.

155. Se sostiene que, en los hechos lesivos de los derechos humanos, hubo participación de personas civiles y que esta fue con la aquiescencia y tolerancia de la autoridad, al concatenar los hechos iniciales en los que es inconcusa la participación de funcionarios encargados de hacer cumplir, con los inmediatamente posteriores en los que perdiera la vida de **A1†**, precisamente porque debido a los tiempos en que se sucedieron no medio un lapso suficiente para desvincular unos de otros.

156. Además, no pasa desapercibido que, por los dichos de los testigos de hechos, y vecinos del lugar, concretamente los **CC. T1** y **T2,** quienes dijeron que desde la posición de vecindad del domicilio de las víctimas, y la certeza de estar despiertos, con motivo del traslado de sus familiares a su centro de trabajo, pudieron percatarse de la presencia de elementos de la Policía Estatal Preventiva, y de personas vestidas de civil, lo que hace concluir que, el desenlace de los lamentables hechos que nos ocupan, no es aislado a los iniciales, sino que desde un principio la autoridad involucrada perpetró las violaciones a derechos humanos que se hacen notar, con la participación de terceras personas, y con ello el conjunto de violaciones a derechos humanos, resulta ser su responsabilidad, ya que se violentan derechos humanos, cuando personas en particular o alguna persona moral cometan ilícitos con la tolerancia o anuencia de algún servidor público o autoridad[116], en este caso las conductas lesivas de la dignidad humana, se desplegaron inicialmente de manera conjunta y fueron fatalmente concluidas por los particulares que contaron con la anuencia de los servidores públicos involucrados.

---

[115] Sentencia de 26 de septiembre de 2006, párrafo 75.
[116] Cfr. Artículo 8º Fracción Vii, inciso c) de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas.

V. Derecho de las víctimas indirectas de desaparición forzada de personas, en relación al derecho de acceso a la justicia y a la verdad.

157. Como se exploró previamente, esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, concluye que los hechos que nos ocupan acaecieron en el contexto de desaparición forzada de personas y hace propia la opinión de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en el sentido de que la "desaparición de una persona representa un reto ineludible para cualquier Estado, pues su maquinaria de justicia e investigación se pone a prueba, no solo frente a sus ciudadanos, sino ante el concierto internacional y ante las organizaciones civiles que pugnan en todo momento por el respeto y vigencia de los derechos humanos. En el caso de la desaparición (…), la existencia de un solo caso es inaceptable y debe movernos como autoridades y sociedad para llegar a la verdad en el mismo y propiciar que esta práctica se elimine por completo"[117].

158. Partiendo de que una de las prioridades en la investigación de desaparición de personas, es determinar el paradero de las víctimas directas, y esto ya acaeció, resta atender el legítimo reclamo de las víctimas indirectas, en calidad de familiares y de la sociedad en su conjunto, entre ellos el acceso a la justicia, la verdad, la reparación del daño y las garantías de no repetición y, con base en ello, se recupere la confianza en las instituciones públicas.

a) Derecho de acceso a la justicia, en relación con el derecho al debido proceso.

159. El derecho al acceso a la justicia, consiste en que toda persona tiene derecho de acudir ante los tribunales para que se le administre justicia de manera pronta, completa, imparcial y gratuita, donde el Estado observará que este derecho se realice en condiciones de igualdad y de no discriminación, garantizando en todo momento las formalidades esenciales del procedimiento, por lo que toda persona tiene derecho a acudir ante los jueces o tribunales competentes, para que le amparen contra actos que violen sus derechos humanos[118].

160. El acceso a la justicia está contemplado en el orden jurídico internacional en la Declaración Universal de Derechos Humanos, misma que en sus artículos 8 y 10, establece "[t]oda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley."[119]. Además de asistirle el derecho a encontrarse "en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal."[120].

161. En mismo sentido el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, establece en su artículo 14.1, que: "Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia"[121]. Además, que "tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil...".

162. Por su parte, el orden jurídico regional de protección de Derechos Humanos, contempla sus propios instrumentos, así En adición, la Declaración Americana de los Derechos y

---

[117] CNDH. "Informe especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre desaparición de personas y fosas clandestinas en México", 6 de abril de 2017, párrafo 8.

[118] CNDH, ¿Cuáles son los derechos humanos?, http://www.cndh.org.mx/Cuales_son_Derechos_Humanos, fecha de consulta 24 de febrero de 2020.

[119] Pedroza de la Llave, Susana Thalía y García Huante, Omar, comps. Compilación de Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos, t. I. Ed. Comisión Nacional de los Derechos Humanos, México 2003, pág. 35.

[120] Ídem

[121] Pedroza de la Llave, Susana Thalía y García Huante, Omar, comps. Compilación de Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos, t. I. Ed. Comisión Nacional de los Derechos Humanos, México 2003, pág. 257.

Deberes del Hombre, en su artículo XVIII, establece que toda persona puede acudir a las autoridades para hacer valer sus derechos, y se le realice un procedimiento sencillo y breve, contra actos de autoridad, que violen en su perjuicio los derechos consagrados en la constitución.

163. En el mismo sentido, el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica", relativo a las "Garantías Judiciales", precisa que "[t]oda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter."

164. El diverso 25.1 del mismo instrumento internacional, en el apartado de "Protección Judicial", señala: "Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.".

165. Por tanto, los Estados no deben poner trabas a las personas que acudan a los jueces o tribunales en busca de que sus derechos sean determinados o protegidos, porque entonces, cualquier norma o medida del orden interno que imponga costos o dificulte de cualquier otra manera el acceso de los individuos a los tribunales, y que no esté justificada por las razonables necesidades de la propia administración de justicia, debe entenderse contraria al artículo 8.1 de la Convención[122].

166. En ese sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha sostenido: "(...) del artículo 8 de la Convención se desprende que las víctimas de violaciones de derechos humanos, o sus familiares, deben contar con amplias posibilidades de ser oídos y actuar en los respectivos procesos, tanto en la procuración del esclarecimiento de los hechos y del castigo de los responsables, como en la búsqueda de una debida reparación"[123].

167. También, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha destacado el derecho al acceso la justicia como una norma imperativa de derecho internacional, la que no se agota ante el hecho de que se tramiten los respectivos procesos internos, sino que exige que el estado garantice que estos aseguren, en un tiempo razonable, la satisfacción de los derechos que tienen las partes en el mismo[124].

168. Sobre la función del Ministerio Público, la Corte Interamericana de Derechos Humanos asumió los siguientes criterios aplicables a las investigaciones ministeriales: "(…) plazo razonable de la duración de las investigaciones", tomar en cuenta: a) la complejidad del asunto, b) la actividad procesal del interesado, c) la conducta de las autoridades judiciales y, d) la afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso. No obstante, la pertinencia de aplicar esos criterios para determinar la razonabilidad del plazo de un proceso depende de las circunstancias particulares, pues en algunos casos, es deber del Estado de satisfacer plenamente los requerimientos de la justicia y esto prevalece sobre la garantía del plazo razonable (…)"[125].

169. La misma Corte Internacional ha emitido pronunciamiento sobre el "deber de investigar" refiriendo que: "(…) es una obligación de medio y no de resultado, que debe ser asumida por

---

[122] Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Cantos vs Argentina, 28 de noviembre de 2002. Párr. 50
[123] Caso Nadege Dorzema y otros vs. República Dominicana, Sentencia de 24 de octubre de 2012, párr. 199.
[124] Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Ulacio vs Argentina, Sentencia de 18 de septiembre de 2003, Serie C, No. 110, párr. 11
[125] "Caso Radilla Pacheco Vs. México", sentencia de 23 de noviembre de 2009, párrafo 244

el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. La obligación del Estado de investigar debe cumplirse diligentemente para evitar la impunidad y que este tipo de hechos vuelvan a repetirse (…) una vez que las autoridades estatales tengan conocimiento del hecho, deben iniciar *ex officio* y sin dilación, una investigación seria, imparcial y efectiva por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad y a la persecución, captura, enjuiciamiento y eventual castigo de todos los autores de los hechos (…)"[126].

170. Es por ello que, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 17, establece que toda persona tiene el derecho fundamental a que se le administre justicia por los tribunales, y en tal virtud, prohíbe a toda persona el ejercicio de la justicia por sí misma: "Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales..."[127].

171. El artículo 20, inciso C, fracción VII, Constitucional, establece los principios generales del proceso penal acusatorio y oral, entre los cuales se encuentran además los derechos de las víctimas, y uno de esos derechos es el de impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño.

172. En México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido a este derecho público subjetivo, como el que toda persona tiene para acceder a los tribunales con el objetivo de plantear una prestación o defenderse de ella, con el fin de que, a través de un proceso, en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión[128].

173. Por su parte, el Código Nacional de Procedimiento Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de marzo de 2014, establece en el artículo 131, las obligaciones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, el cual debe, entre otras, vigilar que se cumpla estrictamente con los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados, debiendo ejercer la conducción y el mando de la misma, coordinándose durante ella con policías y peritos y una vez que tenga noticia del delito, ordenar o supervisar la aplicación de las medidas necesarias para impedir que se pierdan, destruyan o alteren los indicios y cerciorarse de que se han seguido las reglas y protocolos para su preservación y procesamiento, ejerciendo funciones de investigación.

174. El mismo Código Adjetivo Penal, relativo a la proposición de actos de investigación, establece en el ordinal 216, que "durante la investigación, tanto el imputado cuando haya comparecido o haya sido entrevistado, como su defensor, así como la víctima u ofendido podrán solicitar al Ministerio Publico todos aquellos actos de investigación que consideraren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos. El Ministerio Público podrá ordenar que se lleven a cabo aquellos que sean conducentes. La Solicitud deberá resolverse en un plazo máximo de tres días siguientes a la fecha en que se haya formulado la petición al Ministerio Publico". Derecho de la Víctima que se encuentra plasmado, también, en la fracción XVII del artículo 109 del mismo ordenamiento legal.

175. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en la Recomendación No. 14/2019, del 16 de abril de 2019, señaló: "Entre los elementos que integran el debido proceso, están

---

[126] "Caso González y otras ("Campo Algodonero") vs. México", sentencia de 16 de noviembre de 2009 (Excepción, preliminar, fondo, reparaciones y costas), párrafos 289 y 290.
[127] Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Art. 17
[128] Garantía a la Tutela Jurisdiccional Prevista en el Artículo 17 de la Constitución Federal, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Primera Sala, mayo de 2004, t XIX, pág. 513.

los plazos o términos previstos en las normas dictadas por el legislador, cuya observancia forma parte del plazo razonable como condición para un efectivo acceso a la justicia. El plazo razonable, conforme a los derechos humanos, implica el tiempo dentro del cual un órgano jurisdiccional debe sustanciar un proceso, adoptar y hacer cumplir los proveídos que correspondan, según la etapa procedimental de que se trate, así como pronunciar la decisión que culmine la instancia, y que la determinación sea ejecutada."[129]

176. Esto se robustece con el criterio orientador de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis siguiente:

> **"PLAZO RAZONABLE PARA RESOLVER. CONCEPTO Y ELEMENTOS QUE LO INTEGRAN A LA LUZ DEL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.** En relación con el concepto de demora o dilación injustificada en la resolución de los asuntos, el artículo 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, coincidente en lo sustancial con el artículo 6 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, establece que los tribunales deben resolver los asuntos sometidos a su conocimiento dentro de un plazo razonable, como uno de los elementos del debido proceso; aspecto sobre el cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos, considerando lo expuesto por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ha establecido cuatro elementos o parámetros para medir la razonabilidad del plazo en que se desarrolla un proceso: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; c) la conducta de las autoridades judiciales; y, d) la afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso. Además de los elementos descritos, el último de los tribunales internacionales mencionados también ha empleado para determinar la razonabilidad del plazo, el conjunto de actos relativos a su trámite, lo que ha denominado como el "análisis global del procedimiento", y consiste en analizar el caso sometido a litigio de acuerdo a las particularidades que representa, para determinar si un transcurso excesivo de tiempo resulta justificado o no. Por tanto, para precisar el "plazo razonable" en la resolución de los asuntos, debe atenderse al caso particular y ponderar los elementos descritos, conforme a criterios de normalidad, razonabilidad, proporcionalidad y necesidad, para emitir un juicio sobre si en el caso concreto se ha incurrido en una dilación o retardo injustificado, ya que una demora prolongada, sin justificación, puede constituir, por sí misma, una violación a las garantías judiciales contenidas tanto en los aludidos artículos como en el numeral 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que el concepto de "plazo razonable" debe concebirse como uno de los derechos mínimos de los justiciables y, correlativamente, como uno de los deberes más intensos del juzgador, y no se vincula a una cuestión meramente cuantitativa, sino fundamentalmente cualitativa, de modo que el método para determinar el cumplimiento o no por parte del Estado del deber de resolver el conflicto en su jurisdicción en un tiempo razonable, se traduce en un examen de sentido común y sensata apreciación en cada caso concreto."[130]

177. Del análisis lógico jurídico efectuado al conjunto de evidencias que integraron el expediente CDHEZ/237/2018, tenemos que **A1†**, fue sustraído de su domicilio con el ánimo de dañarlo, esto por parte de elementos de la Policía Estatal Preventiva, motivo por el cual, la Fiscalía General de Justicia del Estado, por conducto de la Unidad Especial de Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos inició la investigación de los hechos mediante la Carpeta de Investigación […].

178. En razón a la aparición del cuerpo sin vida de quien posteriormente fuera identificado como **A1†**, se incoó la carpeta de investigación […], misma que inició en el Distrito de

---

[129] CNDH. Recomendación 14/2019 del 16 de abril de 2019, pp.31 y 32.
[130] Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, diciembre de 2012, Registro 2002350.

Ojocaliente, Zacatecas y en fecha 08 de junio de 2018, se envió al distrito de la capital para su acumulación a la Carpeta de Investigación […]. Dentro de la cual se solicitó y autorizó orden de aprehensión en contra de los **CC. I1, I2, […].** Particularmente se cumplimentó en 2018, la de **I1**, quien enfrentó la casusa penal […], misma que concluyó, en primera instancia, con una condena privativa de la libertad, por los delitos de Secuestro Agravado y Abuso de Autoridad, así como el pago de la reparación del daño a favor de los **CC. A2** y **A3**, lo que cubre la responsabilidad penal personal del sentenciado, quien cometió los hechos antijurídicos en grado de participación.

179. Toda vez que esta Comisión de Derechos Humanos tiene por cierta la participación de al menos cinco elementos de la Policía Estatal Preventiva, así como diversos particulares, para que el derecho al acceso a la justicia de las víctimas se tenga como colmado, deberá ésta ser pronta, atendiendo a las complejidades del caso concreto; completa, es decir, agotar los medios necesarios para que el resto de personas involucradas en los hechos sean juzgados conforme a derecho, ya que la justicia no puede ser parcial. Lo que corresponde a la Fiscalía General de Justicia del Estado.

180. Esta Comisión de Derechos Humanos documentó la tolerancia que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas mantuvo de manera incondicional con **I2**, quien fuera el instructor y responsable de operaciones del denominado Grupo Especial de Operaciones, y en esta investigación responsable de los hechos que se les imputaron, pues pese a que mediante informe del **INSPECTOR GENERAL, ISAÍAS HERNÁNDEZ LANDEROS,** otrora Director de la Policía Estatal Preventiva, recibido en este Organismo en fecha 04 de julio de 2018, señaló que **JOHN WILLIAMS CASARA LUNA**, se encontraba suspendido y, sujeto a investigación, esto por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado y para acreditar su dicho aportó copia de los oficios SSP/1449/2018 y SSP/CA/RH/2702/2018, mediante los que, el primero de los cuales instruyó a la Coordinadora Administrativa la suspensión del instructor y ésta a su vez solicitó la suspensión a la directora General de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración de Gobierno del Estado.

181. Lo cierto es que, en comparecencia del 14 de junio de 2018, el propio **I2**, declaró ante personal de este Organismo e indicó que en su calidad de instructor de la Policía Estatal Preventiva, tenía dos elementos asignados para su seguridad y que, a partir de lo que él mismo señaló "*este problema"*, es decir, los hechos que nos ocupan y que el citado consideró calumnias en su contra, y de ello se querelló y se conoce la Carpeta de Investigación número […], se le asignaron otros dos elementos a cargo de su seguridad, ya que dijo, hasta antes de ese problema eran 2 personas, a su resguardo y ahora son 4, y dijo también que los **CC. JUAN DIEGO CABRAL** y **ROBERTO GAYTÁN LÓPEZ**, eran los dos iniciales que tenía asignados y ahora son también los **CC. I5** y **JUAN CARLOS BASURTO BENÍTEZ**. Con lo anterior, se tiene por acreditada la tolerancia de la autoridad en relación a las conductas desplegadas por propio **I2**, a quien no solo se le permitía no hacer registró alguno de sus actividades, sino también tenía protección especial a cargo de dos elementos de la Policía Estatal Preventiva, la que posteriormente se duplicó. Asignándole además de los dos oficiales que ya tenía a un par de efectivos más, entre ellos al **C. I5**, en contra de quien, al igual que el instructor en cita, pendía una orden de aprehensión por los hechos que nos ocupan.

182. Así las cosas es posible hacer notar no solo la tolerancia para con las acciones de propio **I2**, sino también que la suspensión fue al menos temporalmente ficticia. Esto es así que si bien la autoridad documentó mediante oficio SSP/1449/2018, en fecha 08 de junio de 2018, de lo que tomó conocimiento la Directora de Recursos Humanos, en fecha 11 de junio de 2018, de que se había ordenado y ejecutado la suspensión del instructor **CASARA LUNA**, es un hecho que no se le notificó a la persona suspendida, quien días posteriores, el 14 de junio de 2018, aseguró que había recibido el apoyo de su institución ya que a raíz de lo que él cita como ese problema, se duplicó el número de personal de seguridad que la Secretaría de Seguridad Pública destinaba para resguardar su integridad personal.

183. Posterior a ello, en fecha 12 de septiembre de 2018, se requirió informe especifico de estos hechos, es decir, si en efecto los funcionarios encargado de hacer cumplir la ley en cita, es decir, los **CC. JUAN DIEGO CABRAL, ROBERTO GAYTÁN LÓPEZ, I5** y **JUAN CARLOS BASURTO BENÍTEZ,** estaban comisionados como escoltas o seguridad exclusiva de **I2**, en cuya respuesta se reitera que éste se encuentra suspendido como inicialmente se había informado. No obstante su suspensión, al momento de indicar el estatus laboral y comisión que desempeñan los oficiales en comento, la autoridad marcó copia de lo que le informara el **INSPECTOR ISAÍAS HERNÁNDEZ LANDEROS,** otrora Director de la Policía Estatal Preventiva, quien mediante oficio de 18 de septiembre de 2018, es decir 10 días después de su supuesta suspensión aseguró que los elementos **JUAN DIEGO CABRAL, JUAN CARLOS BASURTO, ROBERTO GAYTÁN LÓPEZ** y, **I5** se encontraban comisionados para salvaguardar la integridad física del instructor de **I2**, es decir, que el propio Director de la Policía Estatal Preventiva, lejos de atender la instrucción de la suspensión, favoreció el cuidado del responsable del grupo [...] y con ello de las violaciones a derechos humanos y hechos antijuridicos que sanciona la ley penal de que se ha hecho recuento.

184. Con esta protección especial y abundante en número de efectivos a su cuidado, se confirma que la autoridad benefició y encubrió temporalmente a **I2** y con ello dilató el proceso, toda vez que, por un lado, la autoridad reconoció que, por ser parte de la Investigación de una carpeta de Investigación ordenó la suspensión del instructor **I2**, lo que no fue obstáculo para que siguiera recibiendo protección personal en calidad de instructor de esa corporación policiaca. La investigación penal en cita, resulta ser la Carpeta de Investigación […], misma que se instruye en contra de quien resulte responsable, y por comunicación con la Fiscal del Ministerio Público se tiene que dentro de la misma se solicitaron diversas ordenes de aprehensión, entre ellas las de **I1**, única persona que ha enfrentado proceso penal en su contra, concretamente el [...], en donde recibió sentencia condenatoria en primera instancia, más no se concretó con puntualidad la del Instructor de la Policía Estatal Preventiva, suspendido pero con un grupo de 4 elementos a su resguardo. Ya que si bien en la actualidad están sujetos a procedimiento los **CC. I2** y **[…]**, su aprehensión se postergó en el tiempo por casi tres años.

185. Es de debido proceso y acceso a la justicia también, que la justicia deberá de ser completa, y en el caso que nos ocupa esto no ha sido así. Se tiene por cierto que no se han cumplimentado el total de las ordenes de aprehensión que inicialmente solicitó la **LIC. LINA BEATRIZ BARBOSA LÓPEZ**, Fiscal del Ministerio Público responsable inicial de la indagatoria, quien solicitó y le fueron concedidas 5 órdenes de aprehensión, las que aseguró se concedieron desde el 31 de agosto de 2018, para hacer comparecer ante la justicia a los **CC. I1, I2, […],** de las que, como se dijo, solo la de **I1**, se cumplimentó. En tanto que otras dos, las de los señores **I2** y **[…],** el 21 de junio de 2021, es decir, a 2 años, 9 meses y 21 días del 31 de agosto de 2018, en que fueron concedidas. Resta incluso cumplimentar las de los **CC. I4** y **I5,** por lo que se sostiene que en tiempo de atender la característica de expedita que debe ser la justicia solo se cumplimentó la de **I1**, quien enfrentó la causa penal […], tras la investigación […].

186. Se dijo entonces, en enero de 2019, que se estaba trabajando en la ejecución de las restantes 4 órdenes de aprehensión concedidas en la causa penal […], trabajo que no se ha concretado en su totalidad, pues en fecha 25 de mayo de 2021, la **LIC. IBETH FAVELA GARCÍA,** Coordinadora de Aprehensiones, Colaboraciones y Extradiciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, informó que efectivamente dentro de la causa penal [...], que se sigue en el Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Ojocaliente, Zacatecas, se dictaron 5 órdenes de aprehensión, en contra de las siguientes personas **I5, I1, I2, I3** y **MARTÍN DE JESÚS ADEME ORTIZ**. Agregó que, de estas 5 órdenes se ejecutó el 27 de septiembre del 2019, la dictada en contra **I1**, más el resto en esa fecha seguían sin cumplimentarse y, según su dicho, trabajando para dar cumplimiento a las mismas.

187. Trabajo que ha tenido resultados parciales, ya que en posterior informe, de fecha 28 de junio de 2021, la **LIC. IBETH FAVELA GARCÍA,** Coordinadora de Aprehensiones, Colaboraciones y Extradiciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, informó que no fue en fecha 21 de julio, sino en junio de 2021, se cumplimentó la aprehensión de **I2** y **I3**, quedando pendiente de cumplimentar las de los **CC. I5** y **MARTÍN DE JESÚS ADEME ORTIZ**. Con lo que, desde agosto de 2018, a la fecha no se han cumplimentado, lo que demuestra la dilación en la procuración de justicia, en detrimento de los derechos de las víctimas indirectas de los hechos. Ahora bien, la imposibilidad de ejecución de las citadas ordenes de aprehensión que se ordenaron en la causa penal [...], no encuentra justificación temporal, esto es así ya que se concedieron en agosto de 2018, y a los días que transcurren del 2021, no se han cumplimentado en su totalidad, incumplimiento que, inicialmente es responsabilidad exclusiva de la Fiscalía General de Justicia del Estado[131]. Ante la omisión de cumplimentar las órdenes de aprehensión han suspendido en el tiempo el derecho de las víctimas indirectas de recibir el acceso a la justicia y la verdad correspondientes.

188. Especial pronunciamiento merece el hecho de que esta Comisión de Derechos Humanos, recibió información de la ubicación del resto de las personas en contra de quien se requirió orden de aprehensión, quienes en fecha 02 de octubre de 2019 estaba dado de baja solo **I2,** en tanto que los **CC. I3, I4** y **ALONZO MARTÍNEZ MARTÍNEZ** estaban comisionados en la Policía Metropolitana, en misma fecha el hoy sentenciado **I1,** aún se encontraba de servicio en la Policía Estatal Preventiva.

189. Ahora bien, en fecha recientes, concretamente el 31 de mayo de 2021, la **L.C.P. PATRICIA MARTÍNEZ CUELLAR,** informó al **INSPECTOR ISRAEL REYES GARCÍA,** que los **CC. I3** y**, I4** son elementos en activo de la Policía Estatal Preventiva, es decir, que no existía impedimento alguno para que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, por conducto la Coordinación de Aprehensiones Colaboraciones y Extradiciones diera cumplimiento a las órdenes judiciales que pesan en contra de las personas citadas, las que como se dijo, a pesar de su evidente facilidad de ubicación cumplimentó hasta el 21 de junio de 2021. Lo que hace inverosímil que, desde el 31 de agosto de 2018, a la fecha de informe de la **LIC. IBETH FAVELA GARCÍA,** Coordinadora de Aprehensiones, Colaboraciones y Extradiciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, que fue el 27 de mayo de 2021, las mismas no se hayan cumplimentado, denotando así una inactividad que provoca la dilación en el acceso a la justicia de las víctimas, y con ello el retardo también del ejercicio de su derecho a la verdad. Que, como se ha sostenido, descansa en las bases de investigación y juzgamiento. Así entonces, si la investigación inicial ordenó la aprehensión de un grupo de personas, y ésta no se ha concretado en su totalidad, ya que se han ejecutado de manera parcial y dilatoriamente, no ha sido posible dar paso a la segunda parte, consistente en el juzgamiento del total de personas involucradas, y con ello su derecho a la verdad, pese al juzgamiento de una persona la etapa de juzgamiento sigue latente, ya que solo fue participante en los hechos y no autor único, por lo que deberá hacer comparecer ante la justicia al total de personas involucradas.

190. Esta Comisión de Derechos Humanos, si bien no conoció queja en contra de personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, en respeto a la voluntad de la parte quejosa, de quien solo fue su deseo que se conociera queja en contra de los elementos de la Policía Estatal, lo que no exime la responsabilidad de la Fiscalía General de Justicia, de quien es inverosímil creer que se requieran dos años para ejecutar órdenes de aprehensión de personas plenamente identificadas, especialmente cuando estos formaron parte, y algunos a la fecha son efectivos adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública. Se sostiene que las personas en contra de quien pende la Orden de Aprehensión estaban planamente identificadas y ubicadas, ya que este Organismo tuvo conocimiento en fecha 02 de octubre de 2019, por conducto del informe que rindió el **C. ALEJANDRO CAMARILLO**

[131] Cfr. Artículo 33 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas.

LOERA, entonces Subdirector de la Policía Estatal Preventiva de que **I1** en esa fecha, formaba parte en activo de la Policía Estatal Preventiva, que **I2**, estaba dado de baja de esa corporación y que los **CC. I3, I4** y **I5,** se encontraban comisionados en la Policía Metropolitana, es decir, en esa fecha, ya estaban los elementos de la Policía de Investigación trabajando en las órdenes de aprehensión, de personas que eran perfectamente identificables, más no han concretado las mismas. Por lo que la dilación en la ejecución de las órdenes de aprehensión en contra de las personas, presuntamente responsables de los hechos, obstaculiza el ejercicio del derecho al debido proceso, ya que la justicia al incumplir con una de sus características esenciales que es la prontitud, deja de practicar su propósito, de ahí que es imperativo que la Fiscalía General de Justicie cumplimente las órdenes de aprehensión, ya que en este y otros casos, las mismas deben de cumplirse con la prontitud debida, para iniciar el proceso que permita el acceso a la justicia y a la verdad.

191. En ese punto, en donde evidencía la inactividad en la ejecución de las órdenes de aprehensión, llama poderosamente la atención, la información brindada por el **INSPECTOR GENERAL ISAÍAS HERNÁNDEZ LANDEROS,** entonces Director de la Policía Estatal Preventiva, cuando manifestó y documentó que **JOHN WILLIAMS CASARA LUNA**, se encontraba suspendido, según se reportó de la consulta de su estatus laboral y afirmó que el motivo obedecía a que estaba sujeto a investigación por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado y afirmó también que el resto de los oficiales, es decir, los **CC. I1, I3, I4** y **I5,** se encontraban en activo en diversos servicios fijos.

192. Con lo informado por el **INSPECTOR GENERAL ISAÍAS HERNÁNDEZ LANDEROS,** otrora Director de la Policía Estatal Preventiva, del 18 de septiembre de 2018, se puso en entredicho la suspensión o baja de **JOHN WILLIAMS CASARA LUNA**, precisamente porque en esa fecha, se aseguró que el citado, con calidad de instructor de la corporación, tenía a su disposición 4 elementos de la Policía Estatal Preventiva, quienes estaban a cargo de su seguridad, fecha en que según lo informado con anterioridad ya estaba suspendido por enfrentar una investigación ante la Fiscalía General de Justicia del Estado.

193. Ahora bien, si se informó que, el **SR. JOHN WILLIAMS CASARA LUNA**, fue suspendido por enfrentar una investigación en la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, es decir, por la presunción de su participación en hechos que sanciona la ley penal y esta presunción que no pendía solo en contra del citado y así lo tenía claro el entonces Director de la Policía Estatal Preventiva ya que la **LIC. LINA BEATRIZ BARBOSA LÓPEZ**, Fiscal del Ministerio Público, Adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de delitos Cometidos por Servidores Públicos, tuvo una serie de comunicación interinstitucional con él, algunas comunicados con el carácter de urgente, como la del 05 de junio de 2018, en la que mediante oficio 607/2018, le solicitó con ese carácter informar si se encontraba detenido **A1†**, al día siguiente 06 de junio de 2018, le hizo saber que se integraba la Carpeta de Investigación […], por el delito de abuso de autoridad y los que resulten y le pidió información del total de unidades de esa corporación que laboraron los días 04 y 05 de junio de 2018.

194. Posteriormente, el 07 de junio de 2018, le requirió para que se permitiera la revisión de los vehículos de esa corporación policiaca, fecha en que resultaron asegurados tres vehículos pertenecientes al grupo […], mismos que el **INSPECTOR GENERAL, ISAÍAS HERNÁNDEZ LANDEROS,** entonces el Director de la Policía Estatal Preventiva, informó a este Organismo desde el 13 de junio de 2018, las características, marca y modelo de las unidades a cargo del grupo [...], de las que dijo además se encontraban aseguradas por la autoridad competente. Aseguramiento de las unidades que, desde esa fecha, es decir, el 07 de junio de 2018, tenía conocimiento que la investigación a cargo de la Fiscalía General de Justicia del estado era en contra de los elementos que conformaban en grupo [...], cuyas unidades fueron aseguradas. Luego entonces, que solo se haya suspendido a quien estaba a cargo del grupo luce insuficiente frente a la imputación que se le hizo a todo el Grupo Especial de Operaciones.

195. De ahí que, lo informado con relación a que **I2**, fue suspendido y el resto de personal del Grupo Especial de Operaciones estaban en activo y tenían comisiones fijas y, algunos de ellos estaban comisionados a otra corporación policiaca, hace presumir una táctica de entorpecimiento de la investigación, pues el criterio a seguir con los integrantes del grupo [...], no fue uniforme.

196. La suma de estas peculiaridades que se han detectado en la investigación de los hechos, hace innegable que la procuración de justicia para **A1†** y su familia, ha sido retardada interinstitucionalmente, ya que no ha tenidos resultados concretos dentro de un plazo razonable. Ello en función a que las autoridades en el orden de su responsabilidad están obligadas a coadyuvar, a no poner trabas a las personas que acudan a su competencia en busca de que sus derechos sean determinados o protegidos. Esto es así porque, cualquier norma o medida del orden interno que imponga costos o dificulte de cualquier otra manera el acceso de los individuos a los tribunales, y que no esté justificada por las razonables necesidades de la propia administración de justicia, debe entenderse contraria de los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en materia de acceso a la justicia y protección judicial a que tienen derecho.

b) Derecho a la verdad.

197. Como se dijo, la violación al derecho a no ser víctima de desaparición forzada, suprime el ejercicio de los derechos de las personas, además en muchos de los casos, como el que nos ocupa, la aparición de la persona es sin vida, y con ello se da la desaparición de su personalidad para exigir los derechos conculcados, por ello se traslada a las víctimas indirectas el ejercicio de algunos de ellos, en este caso, el derecho a la verdad.

198. El derecho a la verdad, implica el acceso de las víctimas indirectas y a la sociedad que los haya sufrido, a la verdad histórica de los hechos. Para su ejercicio efectivo, en primer lugar, es indispensable que los servidores públicos preserven y procesen debidamente el lugar de los hechos o del hallazgo, los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como de los instrumentos, objetos o productos del delito y, por otro, que los agentes encargados de la investigación ordenen la práctica de todas aquellas diligencias que permitan conducir al conocimiento de la verdad, para estar en condiciones de tener comunicación efectiva con las víctimas y éstas cuenten con la verdad de los hechos, en primer lugar mediante una investigación exhaustiva y confiable y posteriormente con el juzgamiento de los responsables.

199. El derecho a la verdad, según el criterio de la Corte Interamericana de Derechos Hunos, quien sentó el criterio de que el derecho a la verdad: "(…) se encuentra subsumido en el derecho de la víctima o de sus familiares a obtener de los órganos competentes del Estado el esclarecimiento de los hechos violatorios y las responsabilidades correspondientes, a través de la investigación y el juzgamiento (…)".[132] Así en el caso diverso de "Myrna Mack Chang Vs. Guatemala"[133], la Corte señaló que el derecho a la verdad significa la prerrogativa que tiene toda persona, incluyendo a los familiares de las víctimas de conocer lo que sucedió, saber quiénes fueron los responsables y consideró que constituye un medio de reparación y, por tanto, el Estado debe satisfacer a los familiares de la víctima y a la sociedad como un todo."

200. Este derecho se salvaguarda con la efectiva administración de justicia y se encuentra reconocido, implícitamente, en los artículos 1.1, 8, 24 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 2.3 y 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y en los principios 1 y 3 de la Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para

---

[132] Caso Rodríguez Vera y otros (Desaparecidos del Palacio de Justicia) vs. Colombia, sentencia de 14 de noviembre de 2014 (Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas), párrafo 509.
[133] Sentencia de 25 de noviembre de 2003 (Fondo, Reparaciones y Costas) Párrafos 273 y 274.

las víctimas de delitos y abuso del poder de la ONU, que prevén el derecho de las víctimas y ofendidos al acceso a los mecanismos de justicia en igualdad de condiciones.

201. Por su parte, el estado mexicano consagra el derecho a la verdad en lo previsto en los artículos 20, 21 y 102 constitucionales; y 18, 19, 20, 21 y 22 de la Ley General de Víctimas, que particularmente en el artículo 18 señala que es una prerrogativa de "las víctimas y la sociedad en general a conocer [la verdad de los acontecimientos], los hechos constitutivos del delito y de las violaciones a derechos humanos de que fueron objeto, la identidad de los responsables, las circunstancias que hayan propiciado su comisión, así como a tener acceso a la justicia en condiciones de igualdad".

202. En mismo sentido, Ley de Atención a Víctimas para el Estado de Zacatecas contempla el derecho de las víctimas y de la sociedad en general, esto en los artículos 2°, 5° párrafo séptimo, 8 fracciones III y VII, 9 y 48 fracción IX, de la. Además, su artículo 8 fracciones III literalmente establece que las víctimas tienen derecho: "A conocer la verdad de lo ocurrido acerca de los hechos en que le fueron violados sus derechos humanos para lo cual la autoridad deberá informar los resultados de las investigaciones." Consecuentemente, la carencia de investigaciones o la dilación en estas, conculca el derecho de acceso a la justicia e íntimamente unido con el derecho a la verdad

203. En cuanto a los mecanismos de justicia para garantizar el derecho a la verdad de las víctimas en materia penal, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la obligación de los agentes del ministerio público de investigar y perseguir los delitos (artículo 102); señala que el proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados se reparen (artículo 20); debiendo regir su actuación por los principios de objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución (artículo 21).

204. Esta Comisión de Derechos Humanos considera que en este caso la Fiscalía General de Justicia no ha hecho lo suficiente para garantizar el derecho a la verdad de los hechos en que se afectó la vida privada, la integridad, y la vida de **A1†**, y ha violentado en el tiempo el mismo, pues de la revisión a las indagatorias se advierte que no se ha cumplido con la obligación de proveer una justicia completa, expedita e imparcial. Pues solo se ha juzgado a uno de los involucrados en los hechos, cuando inicialmente, y no de forma limitativa se requirió de orden de aprehensión para 05 personas. Además de que por los hechos en que finalmente perdiera la vida, no se ha judicializado carpeta alguna en contra de persona o personas posiblemente responsables de esos hechos.

205. Así las cosas y en atención la víctima, en su caso, y sus familiares, tienen derecho a conocer la verdad de los hechos que originaron las violaciones a los derechos humanos, lo que parte de la premisa inicial e indispensable de que exista una oportuna y veraz investigación y con ello el esclarecimiento de los hechos. Este derecho también corresponde a la sociedad en su conjunto, para saber la verdad de lo ocurrido y la razón y circunstancias que originaron los mismos, como una manera de coadyuvar para evitar que vuelvan a ocurrir. Lo anterior, acorde con el "Informe del Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados" de la Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, en donde se dijo que: "El carácter inexorable del conocimiento de la verdad nos permite afirmar desde una perspectiva histórica, que verdad, justicia y reparación son componentes fundamentales para una sociedad democrática (…)".[134]

206. Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en relación con el derecho a la verdad, además, estableció en su Informe "Derecho a la verdad en América[135], que: "Derecho a la verdad como medida de reparación. Al ser una obligación de los Estados

[134] 6 E/CN.4/2006/52, 23 de enero de 2006, párrafo 66.
[135] Informe de 13 de agosto de 2014. Párrafo 29.

derivada de las garantías de justicia, el derecho a la verdad también constituye una forma de reparación en casos de violaciones de derechos humanos. En efecto, el reconocimiento de las víctimas es relevante porque significa una forma de admitir la importancia y el valor de las personas en tanto individuos, víctimas y titulares de derechos. Asimismo, el conocimiento de las circunstancias de modo, tiempo y lugar, las motivaciones y la identificación de los perpetradores son elementos fundamentales para reparar integralmente a las víctimas de violaciones de derechos humanos."

207. En la Recomendación No. 5VG/2017 emitida el 19 de julio de 2017, por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, señaló que las víctimas indirectas, además del daño psicológico que sufren derivado de la desaparición de su familiar, se enfrentan a la revictimización institucional cuando acuden ante la autoridad investigadora para denunciar los hechos, en virtud de que son sometidas a interrogatorios y en diversas ocasiones no reciben un trato sensible, además de que la investigación del delito no se lleva a cabo con la debida diligencia, inmediatez y de manera exhaustiva; en algunos casos no se realizan las acciones necesarias de búsqueda y localización de la víctima, lo que provoca incertidumbre e impunidad, transgrediéndose así el derecho a conocer la verdad.

208. En este sentido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el "Caso de la Masacre de La Rochela vs. Colombia[136]", resaltó la importancia de la debida diligencia en las investigaciones, e indicó que: "la inefectividad de tales procesos penales queda claramente evidenciada al analizar la falta de debida diligencia en la conducción de las acciones oficiales de investigación. Esta falta de debida diligencia se manifiesta en la irrazonabilidad del plazo transcurrido en las investigaciones, la falta de adopción de las medidas necesarias de protección ante las amenazas que se presentaron durante las investigaciones, las demoras, obstáculos y obstrucciones en la realización de actuaciones procesales y graves omisiones en el seguimiento de líneas lógicas de investigación".

209. Por ello, esta Comisión de Derechos Humanos considera que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, no debe postergar más el acceso al derecho a la verdad de las víctimas indirectas, quienes al igual que la sociedad tiene derecho al conocimiento de las circunstancias de modo, tiempo y lugar, así como las motivaciones y la identificación de los perpetradores, como parte del derecho a ser reparados integralmente de las víctimas de violaciones de derechos humanos. Derecho que se sustenta en las bases de la investigación y el juzgamiento.

210. Por supuesto, el derecho de acceso a la justicia y a la verdad, no se agota con el simple trámite de procesos internos, sino que debe actualizar la justicia expedita como un todo. El caso que nos ocupa, denota una investigación inicial que nace de la denuncia de hechos delictivos que en fecha 05 de junio de 2018, interpuso la señora **A2,** con lo que se inició la Carpeta de Investigación número […]**,** en la que se conocen los antijurídicos de abuso de autoridad y secuestro. A esta se le sumó la que con motivo de los hechos en que perdiera la vida **A1†**, cuyo cuerpo apareció el día 06 de junio de 2018, en el camino a la comunidad de [...], Ojocaliente, Zacatecas, marcada con el número […], iniciada con motivo o por lo que hace a los hechos en que apareciera una persona lesionada el hospital de Cuauhtémoc, que contiene acta de aviso de hechos del 05 de junio de 2018, en donde se reportó ese hecho, y la posterior sustracción de la persona lesionado, pues los elementos de Policía de Investigación ya no lo encontraron en nosocomio en cita. En esa misma fecha se giró solicitud de investigación y radicó la Carpeta de Investigación, se inspeccionó el lugar por parte de los elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas. Dentro de esa Carpeta de Investigación, es decir, la número […], el 07 de junio de 2018, se solicitó dictamen pericial de campo, de búsqueda de células epiteliales y de hematología forense. Finalmente, en misma fecha se determinó la incompetencia de la Unidad de Investigación Mixta de Ojocaliente y mediante oficio

[136] Sentencia de 11 de mayo de 2007. Párrafo 155.

1879/2018, se remitió a la Unidad de Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, para acumularse a la […].

211. A su vez el mismo día 06 de junio de 2018, se elaboró acta de aviso de hechos, por la aparición del cuerpo sin vida de una persona, y una manta con leyenda alusiva a la causa de muerte, en esta fecha rindieron informe los elementos de la Policía de Investigación y anexaron acta de inspección e identificación de cadáver, acta de inspección del lugar y levantamiento de cadáver y, acta de inspección de objetos, con lo que se acordó radicar la […], por el delito de homicidio , acordándose su radicación así como las siguientes diligencias: amplia y minuciosa investigación, dictamen pericial de balística de identificación, dictamen de residuos de disparo de arma de fuego, ficha necrodactilar, dictamen pericial de corte ungueal, dictamen toxicológico para determinación de alcohol etílico y metabolitos de drogas de abuso, dictamen pericial de campo, toma de muestra biológica de referencia, necropsia de ley y cronotanatodiagnóstico. Lo anterior, para posteriormente acordar la acumulación a la carpeta anterior, que finalmente se derivó y acumuló a la […].

212. En cuanto a la función investigativa, se tiene que con el inicio y la investigación de la Carpeta de Investigación número […]**,** la que solo ha llevado a juicio a una persona, y es flagrante que la conducta punible y violatoria de derechos humanos se cometió tumultuariamente, por lo que aún con la evidencia de la celeridad en la misma, no es posible tener por agotada la etapa de investigación, ya que los fiscales en los procedimientos penales, de conformidad con la ley, deberán cumplir sus funciones con imparcialidad, firmeza y prontitud, respetar y proteger la dignidad humana y defender los derechos humanos, contribuyendo de esa manera a asegurar el debido proceso y el buen funcionamiento del sistema de justicia penal[137]. En este caso, la prontitud de la función de la fiscalía se ha visto entorpecida por el incumplimiento de las órdenes de aprehensión solicitadas.

213. Entorpecimiento que violenta en el tiempo el derecho a la verdad, mismo que implica iniciar y concluir una investigación *ex officio* y sin dilación, investigación que debe ser seria, imparcial y efectiva por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad y a la persecución, captura, enjuiciamiento y eventual castigo de todos los autores de los hechos, especialmente cuando existen indicios de que están o puedan estar involucrados agentes estatales[138]. Consecuentemente, para garantizar una adecuada procuración de justicia se debe: evitar la dilación en el trámite de la averiguación previa; garantizar el desahogo de las diligencias de investigaciones necesarias para acreditar el delito y la probable participación del indiciado; preservar los indicios del delito a fin de asegurar que las líneas de investigación puedan agotarse y propiciar una mayor elaboración de investigación por parte de los elementos de la policía, entre otras.

214. En el caso a estudio, como se indicó en el apartado anterior, la dilación en las ejecuciones de las órdenes de aprehensión solicitadas por el Ministerio Público y autorizadas por la autoridad judicial, son la base del, retraso de la investigación y con ello de la posibilidad de acceder a la verdad de los hechos. Adicionalmente, la nula investigación encaminada a esclarecer la responsabilidad penal, en relación con los hechos en que perdiera la vida **A1†**, se suma al hecho de que en materia del abuso de autoridad y secuestro han recibido una parcial procuración de justicia, con el enjuiciamiento de solo uno

---

[137] Cfr. Artículo de las Directrices sobre la función de los fiscales, de la Organización de las Naciones Unidas, celebrado dictadas Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana (Cuba), del 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990, ONU Doc. A/CONF.144/28/Rev. 1 p. 189 (1990) rescatada de https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/roleofprosecutors.aspx#:~:text=Los%20fiscales%2C%20de%20conformidad%20con,del%20sistema%20de%20justicia%20penal.

[138] Cfr. Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia, párr. 143; Caso Heliodoro Portugal Vs. Panamá, párr. 144, y Caso Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia, párr. 101.

de los participantes, consecuentemente y tal y como la Corte ha considerado, tenemos por cierto que se ha postergado el acceso a la verdad en agravio de los familiares cercanos[139].

215. Esta comisión tiene por cierto el sufrimiento de los familiares de **A1†**, quienes incluso perdieron su vecindad, con motivo de las medidas de protección impuestas, las que si bien son con el ánimo de garantizar su seguridad, hicieron que se perdiera el contacto directo y acostumbrado con el resto de su familia, causando con ello un sufrimiento adicional al de la pérdida de su familiar y desconocimiento de la verdad, al dejar de tener la convivencia habitual con otros miembros de su familia.

216. En virtud de lo expuesto, este Organismo concluye que quedó acreditado que se violentó en perjuicio de los **CC. A2, Q1, A3, A4** y esposa **K (N), MENOR […],** y **VI7,** causando con ellos un sufrimiento adicional al de la pérdida de su familiar y desconocimiento, las obligaciones previstas en los artículos 1.1 y 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José", Costa Rica, 8 y 10, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; XVIII, de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 1, 2, 4, 6, inciso c), los principios orientadores contenidos en los artículos 1 y 2 del Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, que en términos generales prevén el derecho de las víctimas al acceso equitativo, efectivo y en condiciones de igualdad a los mecanismos de justicia, a las garantías judiciales, a que sean tratadas dignamente y a recibir la atención oportuna que requieren.

X. CONCLUSIONES DEL CASO.

1. De las evidencias expuestas en el apartado que antecede, quedó demostrado que el pasado 5 de junio de 2018, entre las 5:00 y las 5:30 horas, elementos de la Policía Estatal Preventiva de Zacatecas, entre los que se encontraban los tripulantes de la patrulla con número económico 571 y una camioneta Suburban Blanca, entre otros vehículos, ingresaron sin orden o mandamiento judicial al domicilio de la persona quejosa **Q1**, violentando el derecho a la legalidad y seguridad jurídica en relación con el de la vida privada en su modalidad de inviolabilidad del domicilio.

2. Se tiene por cierto que, al domicilio de las víctimas ingresaron 6 personas con armas largas, tres de ellos se dirigieron a la habitación en la que se encontraba la persona quejosa y su pareja **A2.** En ese momento una de las personas servidoras públicas que ingresó al domicilio, derribó a la quejosa **A2**, le amarró las manos por la espalda y la amordazó con una cinta color gris. En ese momento, también amarraron a la persona quejosa **Q1**. Mientras ello sucedía, las personas quejosas escuchaban como golpeaban a sus hijos en otra de las habitaciones del inmueble.

3. Los elementos restantes ingresaron a una habitación conjunta, en la que se encontraban **A3** y su pareja, **A5**, al joven **A3** lo sacaron de la habitación a base de patadas, dirigiéndolo a la cocina del inmueble. En ese momento, salió el joven **A1†**, a quien también detienen y arrodillan en la cocina mientras les preguntaban sobre "dónde estaba la droga". Enseguida, al joven **A1†,** lo amarran de las manos con cinta y lo amordazan con un calcetín, para posteriormente sacarlo del domicilio. El joven **A1†** fue sacado de su domicilio vistiendo solo un pantalón y sin calcetines, actualizándose la desaparición forzada de personas en su perjuicio y la violación a los derechos humanos del resto de habitantes de la vivienda, a saber: **CC. Q1, A2**, **A3**, **A4**, **T4, M1, M2, A5**, **A6** y **K "N"**, todos habitantes del domicilio.

4. Ese mismo día, siendo las 9:12 horas, **A1†,** llegó al Centro de Salud de Cuauhtémoc, Zacatecas, descalzo y vistiendo únicamente un pantalón de mezclilla, encontrándose atado

[139] Cfr. Caso Trujillo Oroza Vs. Bolivia. Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de febrero de 2002. Serie C No. 92, párr. 114; Caso La Cantuta Vs. Perú, párr. 125, y Caso Anzualdo Castro Vs. Perú, párr. 113.

con las manos hacia tras con cinta, con una mordaza de tela en la boca. Ante dicha situación, el personal de salud de dicho Centro lo pasó al área de hospitalización; sin embargo, a las 9:30 horas, una camioneta blanca tipo Suburban dañó el portón de acceso al Centro de Salud e ingresaron al mismo dos hombres armados, quienes buscaron a la víctima y siendo las 9:40 horas lo sacan a empujones de dicho inmueble. El personal sanitario señaló que posterior a ello, se escucharon detonaciones de arma de fuego.

5. El 6 de junio de 2018, se recibió un llamado de emergencia al 911, a través del cual se informó que se había localizado un cuerpo a un costado del basurero del camino que conduce a Ex Hacienda de [...], Ojocaliente. Posteriormente, se determinó que los restos localizados correspondían a los de la víctima **A1†.**

6. Acreditados dichos hechos, esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, reitera que el Estado mexicano, por conducto de las instituciones, tiene la obligación de garantizar la seguridad y salvaguardar los derechos humanos, el domicilio, la integridad de las personas y la vida. Sostiene que, las corporaciones de seguridad pública, son garantes del respeto de lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales suscritos y ratificados por México y en las leyes y reglamentos aplicables. Por tal motivo, el Estado Mexicano ha conferido a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, el uso legítimo de la fuerza y el imperativo del orden público, por tanto, cuando los funcionarios encargado de hacer cumplir la ley, trastocan la legalidad, y desde su posición violentan la esfera jurídica de una persona y su familia, y la legalidad y seguridad jurídica del Estado. Se hace imperativo la investigación de los hechos, las sanciones administrativas y penales que deban imponerse, la puntual reparación del daño causado, y garantizar su no repetición a fin de que se restablezca el orden.

7. Esta Comisión tiene por cierto que elementos de la Policía Estatal Preventiva, que conformaron el Grupo Especial de Operaciones al mando de **I2**, incursionaron violentamente en el domicilio de **Q1**, golpearon, ataron y amordazaron a algunos habitantes de la vivienda, privaron de su libertad a **A1†,** consintieron la participación activa en estos hechos de personas ajenas a esa corporación policiaca y, toleraron también que se le privara de la vida. Con ello han violentado en perjuicio de todos sus habitantes de ese domicilio los deberes relacionados con la inviolabilidad domicilio consagrado en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los numerales 11.2, y 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con 1.1 del mismo instrumento.

8. Esta Comisión de Derechos Humanos tiene por acreditado que **A1†**, fue ilegal y arbitrariamente detenido en su domicilio, pues no existió en su contra mandato judicial o ministerial, ni se estaba ante la comisión flagrante de antijurídico alguno. Además de que, con la negativa que al respectó vertió la autoridad, se acreditó también la desaparición forzada transitoria de éste y con ello se conculcó el artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en conexión con el artículo 1.1 de la misma, así como 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues la autoridad involucrada al negarse a informar el destino de esta privación ilegal y arbitraria configuraron la desaparición forzada de esta víctima directa. La que se cometió además con la tolerada participación de personas ajenas a esa corporación.

9. Bajo esta misma línea argumentativa, quedó acreditado que, una vez que fue detenido el joven **A1†**, no fue trasladado y puesto a disposición de forma inmediata de la autoridad correspondiente, de hecho, ello en ningún momento aconteció, por el contrario, los agentes aprehensores lo mantuvieron cautivo, seguida dicha privación de la libertad de la falta de información y la negativa a informar sobre el paradero de la persona. Lo que aconteció bajo el mando de quienes tripulaban la patrulla 571, identificándose como el responsable directo a **JOHN WILLIAM CAZARA LUNA.**

10. Esta Comisión acreditó que la persona agraviada **A1†** fue víctima de violaciones a su integridad física desde el momento en que los agentes aprehensores ingresaron a su

domicilio a efecto de concretar su detención, pues desde ese momento fue agredido con patadas y violencia verbal, ello incluso después de que dicha persona se encontraba sometida, conculcando así derecho a la integridad personal en su modalidad de violación a la integridad física.

11. Este Organismo defensor de los Derechos Humanos tiene por cierto que, los elementos de la Policía Estatal Preventiva, al mando de **JOHN WILLIAM CAZARA LUNA**, conculcaron reiteradamente los derechos humanos de **A1†** y su familia. Situación a la que se sumó su tolerancia para que, en estos hechos, participaran también personas civiles, lo que trajo como consecuencia que, posterior al ingreso ilegal en su domicilio, su afectación a la integridad personal, su ilegal y arbitraria privación de la libertad, personas civiles lo sustrajeran de un nosocomio hasta donde la víctima pudo llegar para pedir auxilio y, finalmente, se le privara de la vida. Por ende, al tenerse por cierta la tolerancia de estos hechos, toda vez que se acreditó plenamente que los elementos de la Policía Estatal Preventiva detuvieron de manera ilegal y arbitraria al joven **A1†**, quienes en lugar de resguardarlo y ponerlo a disposición de la autoridad competente, toleraron que éste desapareciera hasta que solicitó auxilio en un hospital, del que fue sustraído por civiles, hacen a las autoridades estatales corresponsables de la pérdida de su vida, al no haberlo resguardado posteriormente a su detención.

12. En adición, esta Comisión de Derechos Humanos tiene por cierto que **JOHN WILLIAM CAZARA LUNA**, en su carácter de Instructor Especializado en Táctica y Estrategia Policial, fue protegido y resguardado por parte de Elementos de la Policía Estatal Preventiva, lo que entorpeció la investigación penal de los hechos que nos ocupan. Por lo anterior tenemos por cierto que, si bien es la Fiscalía General de Justicia del Estado quien debe de garantizar el derecho de acceso a la justicia y el derecho a la verdad de las víctimas indirectas, la Secretaría de Seguridad Pública formó parte de la violación a estos derechos, no sólo al no coadyuvar en la localización y ejecución de la orden girada en su contra, sino al designar a personal de dicha Secretaría para su protección y resguardo. Mientras que, por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado, este Organismo advierte que, personal de ésta, fue omiso en cumplimentar las órdenes de aprehensión giradas en contras de los elementos de la Policía Estatal Preventiva involucrados en los hechos.

13. Esta Comisión acreditó que el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Seguridad Pública incumplió con su deber de realizar una investigación exhaustiva de los hechos, pues a pesar de contar con los elementos probatorios que se han expuesto a lo largo del instrumento recomendatorio, dicho Órgano Interno resolvió que el acervo probatorio era insuficiente para acreditar que los elementos de la Policía Estatal habían participado en la desaparición forzada de **A1†**.

14. En función de lo anterior, y al ser evidente la violación de los derechos humanos, el estado deberá asumir esta responsabilidad y reparar integralmente a las víctimas. Esto es así de conformidad con el artículo 4°, párrafo segundo, de la Ley de Víctimas del Estado de Zacatecas, que establece que, cuando como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, se reconozca una víctima directa, se considerará como víctima indirecta a los familiares o aquellas personas físicas a cargo de la víctima directa, que tengan una relación inmediata con ella; en ese entendido, considera como tal, al cónyuge, la concubina o el concubinario, las hijas e hijos de la víctima, los padres y los dependientes económicos de la víctima. En el presente caso, es de contemplar a las siguientes personas como víctimas directas de violaciones a sus derechos humanos, a **A1†,** por haberse vulnerado en su contra el derecho a la vida privada, en su modalidad de inviolabilidad al domicilio, el derecho a la legalidad y seguridad jurídica, en concatenación a su derecho a no ser objeto de detención ilegal y arbitraria y el derecho a no ser objeto de desaparición forzada, así como su derecho a la integridad y seguridad personal, en concatenación a su derecho a la vida; de los **CC. A2, A3, A4, T4, Q1, M1**; **M2, A5**, **A6 y K "N"**, a quienes se les vulneraron su derecho a la vida privada, en su modalidad de

inviolabilidad al domicilio; a los **CC. A2, A3, A4,** y **Q1** por haber sido, además, vulnerados en su derecho a la integridad y seguridad personal. Asimismo, se les deberá inscribir a los **CC. A2, A3, A4, T4, Q1, M1**; **M2, A5**, **A6 y K "N"**, en su calidad de víctimas indirectas del joven **A1†,** por lo que hace a su derecho de acceso a la justicia y a la verdad.

XI. REPARACIONES

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 51 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, al acreditarse una violación a los derechos humanos, atribuible a un servidor público estatal, la resolución formulada al respecto debe incluir las medidas necesarias para lograr la efectiva restitución de las personas afectadas en sus derechos.

2. Así, en un respeto irrestricto del Estado de Derecho, las personas gozarán de la garantía de que en caso de ser objeto de violación a sus derechos humanos, podrán reclamar que el o los responsables de dicha vulneración sean sancionados, pues el Estado tiene la posición de garante de sus derechos y, por lo tanto, según lo ha dispuesto la Suprema Corte de Justicia de la Nación, "Las víctimas de violación a los derechos humanos a sus familiares, tienen derecho a la reparación adecuada del daño sufrido. Lo cual debe concretarse a través de medidas individuales tendientes a restituir, indemnizar y rehabilitar a la víctima, así como de medidas de satisfacción de alcance general y garantías de no repetición, mediante los procedimientos previstos legalmente para esos efectos, lo cual no es una concesión graciosa, sino el cumplimiento de una obligación jurídica. Lo anterior deriva tanto del régimen previsto constitucionalmente como de los internacionales, los cuales se manifiestan claramente en el sentido de que es un derecho efectivo de las personas agraviadas a nivel fundamental obtener una reparación proporcional a la gravedad de las violaciones y al daño sufrido.

3. El deber de reparación por violaciones a los derechos humanos, a nivel internacional lo encontramos dispuesto tanto en el sistema universal, como regional de protección a los derechos humanos. En el ámbito universal, se encuentra previsto en los "*Principios y directrices básicos sobre el derecho a las víctimas de violaciones manifiestas a las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves al derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones",* adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 2005, donde se dispone que las violaciones de derechos humanos deben contemplar, de forma apropiada y proporcional a la gravedad de ésta, una reparación plena y efectiva en las formas siguientes: indemnización, restitución, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, lo cual a su vez es también contemplado por la Ley General de Víctimas, en sus artículos 1, último párrafo, 7, fracción I y II, y particularmente en el texto legal del artículo 26, que establece que "*Las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera oportuna, plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva por el daño que han sufrido como consecuencia del delito o hecho victimizante que las ha afectado o de las violaciones de derechos humanos que han sufrido, comprendiendo medidas de no repetición",* además por lo previsto en el artículo 27 del mismo ordenamiento legal. Por ello, resulta particularmente importante la ejecución de las medidas de reparación por parte del Estado, dirigidas a la no repetición en el Estado de Zacatecas de hechos similares a los ocurridos en el presente caso.

4. En el sistema regional, la Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 63.1 establece que: "cuando decida que hubo violación a un derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá, si ello fuera procedente, que se reparen las Consecuencias de la medida o situación que se ha configurado la violación a estos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada".

5. Por su parte, la CrlDH, ha establecido que "*Las reparaciones, como el término lo indica, consisten en las medidas que tienden a hacer desaparecer los efectos de las violaciones cometidas. Su naturaleza y su monto dependen del daño ocasionado en los planos tanto material como inmaterial".*

6. Este doble alcance de la norma reparatoria, ha incidido cada vez con mayor frecuencia en el desarrollo de la jurisprudencia de la CrlDH, dando lugar a una arquitectura reparatoria que tendrá como objetivo, no sólo borrar las huellas que en la víctima produjo el actuar del Estado, sino también evitar que ese tipo de hechos se repitan.

7. Por lo que hace a este derecho, el artículo 51 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, dispone que, al acreditarse una violación a los derechos humanos atribuible a un servidor público estatal, la resolución formulada al respecto debe incluir las medidas que procedan para lograr la efectiva restitución de las personas afectadas en sus derechos.

Modalidades de la reparación del daño. La reparación del daño comprende diversas modalidades en las que se puede materializar:

A) La restitución.

1. Los principios sobre derecho a obtener reparación contemplan a la restitución siempre que haya las condiciones para que ésta sea posible, la cual ha de devolver a la víctima la situación anterior a la vulneración a sus derechos humanos. En el mismo sentido, el tribunal Interamericano ha señalado reiteradamente en su jurisprudencia que la reparación del daño causado requiere, en todos los casos posibles, la plena restitución; *restitutio in integrum*, que significa el restablecimiento de la situación anterior a la violación. En el caso la condición de víctima directa es irreparable.

2. Por consiguiente, por concepto de restitución no es posible revertir un hecho fatal, restando solo la restitución de los derechos de las víctimas indirectas, el que deberá ser la posibilidad de habitar su domicilio con seguridad y acceder íntegramente a la justicia y a la verdad de los hechos.

B) De la indemnización.

1. La indemnización es una medida compensatoria que busca reparar los perjuicios económicamente evaluables que sean consecuencia de las violaciones a derechos humanos, ente los que se incluyen: el daño físico o mental; la pérdida de oportunidades, en particular las de empleo, educación y prestaciones sociales; los daños materiales y la pérdida de ingresos, incluido el lucro cesante; los perjuicios morales; los gastos de asistencia jurídica o de expertos, medicamentos y servicios médicos, psicológicos y sociales[140].

2. En el caso motivo de este documento recomendatorio, este Organismo solicita a la Comisión Ejecutiva de Atención Integral a Víctimas del Estado, realice la inscripción de **A1†**, **A2, A3, A4, T4, Q1, M1**; **M2, A5**, **A6 y K "N",** en su calidad de víctimas de violaciones a sus derechos humanos, en el Registro Estatal de Víctimas a fin de que sean debidamente indemnizados y tengan acceso a los servicios y al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral previstos en la Ley de Atención a Víctimas del Estado de Zacatecas.

C) De la rehabilitación.

[140]Numeral 20 de los Principios y Directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, Asamblea General de las Naciones Unidas, 16 de diciembre de 2005.

1. Las medidas de rehabilitación buscan reducir los padecimientos físicos y psicológicos de las víctimas, a través del otorgamiento de servicios de atención médica, psicológica, jurídica y social que éstas requieran[141].

2. En este contexto, deberá valorarse y proporcionárseles a **A2, A3, A4, T4, Q1, M1**; **M2, A5**, **A6 y K "N",** en su calidad de víctimas directas e indirectas de violaciones a sus derechos humanos, los servicios de atención médica, psicológica, jurídica y social que requieran.

D) De las medidas de satisfacción.

1. Estas medidas, contemplan la verificación de los hechos y la revelación de la verdad, así como la aplicación de sanciones jurídicas o administrativas a los responsables de las violaciones a derechos humanos. Las cuales, además deberán incluir capacitaciones respecto a las normas internacionales de protección a los derechos humanos de las personas privadas de su libertad.

2. Respecto a este concepto, de conformidad con lo establecido por los Principios sobre el derecho a obtener reparaciones, ésta debe incluir, cuando sea el caso, la totalidad o parte de las medidas siguientes: a) medidas eficaces para conseguir que no se continúe con las violaciones; b) la verificación de los hechos y la revelación pública y completa de la verdad; c) una declaración oficial o decisión oficial que restablezca la dignidad, la reputación y los derechos de la víctima; d) una disculpa pública; y e) la aplicación de sanciones judiciales o administrativas a los responsables de las violaciones.

3. Por lo anterior, se requiere a la Secretaría de Seguridad Pública, proceda a iniciar, integrar y concluir investigación administrativa, ya sea a través del Órgano Interno de Control y /o la Unidad de Asuntos Internos, en contra de los elementos que ocuparon la patrulla 571, el día 04 de junio de 2018, los **CC. I3, I4, I5**, **I1** y, **I2.** quienes vulneraron los derechos humanos de **A1†**, **A2, A3, A4, T4, Q1, M1**; **M2, A5**, **A6 y K "N",** a fin de determinar la responsabilidad y sanciones específicas a que cada uno de los participantes se hagan acreedores.

4. En materia penal, la Fiscalía General de Justicia del Estado deberá ejecutar las órdenes de aprehensión pendientes de cumplimentar en contra de los **CC. I3, I4** y **I5** y concluirse los procedimientos judiciales de **I1** y **I2,** a fin de garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas.

E) Garantías de no repetición.

1. Las garantías de no repetición, son aquellas que se adaptan con el fin de evitar que las víctimas vuelvan a hacer objeto de violaciones a sus derechos humanos y, toda vez que los Derechos Humanos son universales, contribuyen a prevenir o evitar la repetición de actos de su misma naturaleza.

2. Por lo que, a fin de prevenir violaciones a los derechos mencionados en párrafos precedentes, resulta indispensable que, el Secretario de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas, ordene se capacite a los elementos de la Policía Estatal Preventiva, en temas relacionados con la obligación de éstos de garantizar el derecho a la vida privada, en relación con la inviolabilidad del domicilio; el derecho a la legalidad y seguridad jurídica, en relación al derecho a no ser objeto de detenciones ilegales y arbitrarias, ni víctimas de desaparición forzada; del derecho a la integridad y seguridad personal, en relación con el derecho a la integridad física y el derecho a la vida, así como en los derechos de las víctimas, en relación al derecho de acceso a la justicia y a la verdad.

3. Para garantizar la no repetición de hechos lesivos de la dignidad humana, es impostergable que se fortalezcan las institucionales policiales dependientes de la Secretaría

[141]Ibid., Numeral 21.

de Seguridad Pública a fin de contribuir en la mejora constante de las actividades de los funcionarios públicos, con pleno respeto a los derechos humanos de las personas que residen en el territorio zacatecano.

XII. CALIDAD DE VÍCTIMAS INDIRECTAS.

1. La Corte Interamericana ha definido qué se entiende por "víctima" en general y qué se entiende por "víctima" stricto sensu dentro de un proceso contencioso. La noción de "víctima" bajo derecho internacional refiere a la parte lesionada. De conformidad con reglas generales de la Responsabilidad Internacional de los Estados, la parte lesionada es aquella *"cuyo derecho individual ha sido denegado o dañado por el acto ilegal internacional o que ha sido de otra manera particularmente afectado por dicho acto".* En el área de la protección internacional de derechos humanos, la parte lesionada es el individuo cuyos derechos han sido violados, es decir la parte cuyos derechos han sido conculcados generándosele un daño. A menudo también se le refiere como la "parte agraviada". El Reglamento de la Corte Interamericana define el término "víctima" de la siguiente manera: "*significa la persona cuyos derechos han sido violados de acuerdo a la sentencia proferida por la Corte".* Es decir, "víctima" es aquella cuyos derechos ya han sido determinados por la Corte habiendo establecido violaciones en su detrimento.

2. Luego, la jurisprudencia de la Corte ha expandido *rationae personae*[142] el reconocimiento de la condición de "víctima" a personas que en su jurisprudencia inicial no eran consideradas como tales. Por ejemplo, en el caso Villagrán Morales y Otros, la Corte reconoció la condición de víctimas con base a derecho propio, de los familiares de los menores asesinados. La Corte reconoció en ese sentido que los familiares de dichos menores torturados y asesinados también habían sufrido en sí, violaciones al artículo 5 de la Convención.

3. En el caso Villagrán Morales y Otros, la Corte Interamericana falló de la siguiente manera: "La Comisión señaló, en sus alegatos finales escritos, que las circunstancias de la muerte de las víctimas, así como la falta de actuación del Estado, habían provocado en los familiares de las mismas "angustias y también considerable temor"[143]. "La Corte debe destacar entre las conductas de los agentes estatales que intervinieron en los hechos del caso y que produjeron un impacto sobre sus familiares, la correspondiente al tratamiento que se dio a los cuerpos de los jóvenes cuyos cadáveres aparecieron en los Bosques de San Nicolás, […]. Estas personas no sólo fueron víctimas de la violencia extrema correspondiente a su eliminación física, sino que, además, sus cuerpos fueron abandonados en un paraje deshabitado, quedaron expuestos a las inclemencias del tiempo y a la acción de los animales y hubieran podido permanecer así durante varios días, si no hubieran sido encontrados fortuitamente. En el presente caso, es evidente que el tratamiento que se dio a los restos de las víctimas, que eran sagrados para sus deudos, y en particular, para sus madres, constituyó para éstas un trato cruel e inhumano."[144]

4. En el caso Bámaca Velásquez[145], la noción ampliada de *rationae personae* fue aplicada a la viuda del desaparecido. En dicha decisión, el juez Cançado Trindade señaló con referencia a la expansión de la noción de "víctima" lo siguiente: *"…Así, la Corte Interamericana ha establecido correctamente que, en circunstancias como las del presente caso Bámaca Velásquez, las víctimas son tanto la persona desaparecida como sus familiares inmediatos."*[146]

---

[142] Por razón de la persona.
[143] Villagrán Morales et al case, Series C: No 63., Sentencia del 19 de noviembre de 1999, óp. Cid. párr. 171
[144] Óp. Cit., párr. 174.
[145] Caso Bámaca Velásquez, Series C No 70. Sentencia sobre Fondo, Sentencia de 25 de noviembre de 2000
[146] Ídem. Párr. 38.

5. También la Corte Interamericana ha estimado que se puede declarar la violación del derecho a la integridad psíquica y moral de familiares directos de víctimas de ciertas violaciones de derechos humanos aplicando una presunción iuris tantum respecto de madres y padres, hijas e hijos, esposos y esposas, y compañeros y compañeras permanentes (en adelante "familiares directos"), siempre que ello responda a las circunstancias particulares en el caso. Respecto de tales familiares directos, corresponde al Estado desvirtuar dicha presunción[147].

6. En el marco legal nacional, la Ley General de Víctimas conceptualiza en su artículo 4, a las víctimas directas e indirectas, entre otras, de la siguiente manera: "…víctimas directas aquellas personas físicas que hayan sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional, o en general cualquiera puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte. Son víctimas indirectas los familiares o aquellas personas físicas a cargo de la víctima directa que tengan una relación inmediata con ella."

7. En el estado de Zacatecas, la Ley de Atención a Víctimas establece en el ordinal 4°, párrafos segundo y tercero: "Son víctimas indirectas los familiares o aquellas personas físicas a cargo de la víctima directa que tengan una relación inmediata con ella. Para este efecto se consideran víctimas indirectas, entre otros, los siguientes: I. El cónyuge, la concubina o el concubinario; II. Las hijas e hijos de la Víctima; III. Los Padres de la Víctima, y IV. Los dependientes económicos de la Víctima."

8. Así de conformidad con el artículo 4°, párrafo segundo, de la Ley de Víctimas del Estado de Zacatecas, establece que, cuando como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, se reconozca una víctima directa, se considerará como víctima indirecta a los familiares o aquellas personas físicas a cargo de la víctima directa, que tengan una relación inmediata con ella; en ese entendido, considera como tal, al cónyuge, la concubina o el concubinario, las hijas e hijos de la víctima, los padres y los dependientes económicos de la víctima.

Por los razonamientos anteriores se puede determinar las siguientes víctimas directas e indirectas, a las siguientes personas:

a) Por lo que hace a las víctimas directas de violaciones al derecho a la vida privada, en relación con la inviolabilidad del domicilio:
   - **A1†**
   - **A2**
   - **A3**
   - **A4**
   - **T4**
   - **Q1**
   - **M1**
   - **M2**
   - **A5**
   - **C. A6**
   - **C. K "N"**

b) Como víctimas directas de violaciones al derecho a la integridad y seguridad personal:
   - **A2**
   - **A3**
   - **A4**

[147] Cfr. Caso Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia, párr. 119, y Caso Kawas Fernández Vs. Honduras, párr. 128.

- **T4**
- **Q1**
- **M1**
- **M2**
- **A5**
- **C. A6**
- **C. K “N”**

c) Como víctima directa de violación al derecho a la legalidad y seguridad jurídica, en relación a no ser objeto de detención ilegal y arbitraria, así como a no ser objeto de desaparición forzada:
   - **A1†**

d) Como víctimas directas de violaciones al derecho a la integridad y seguridad personal, en relación al derecho a la vida:
   - **A1†**

e) Como víctimas indirectas de las violaciones a los derechos humanos de **A1†,** por lo que hace a la vulneración del derecho de las víctimas, en relación al acceso a la justicia y a la verdad**:**
   - **A2**
   - **A3**
   - **A4**
   - **T4**
   - **Q1**
   - **M1**
   - **M2**
   - **A5**
   - **C. A6**
   - **C. K “N”**

XIII. RECOMENDACIONES.

Por lo anterior, y con fundamento en los 1 y 102 apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 2, 3, 4, 8, 17, 37, 51, 53, 54, 56, 57 y 58 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas se emiten las siguientes Recomendaciones:

PRIMERA. En el plazo máximo de un mes, contado a partir de la notificación de la presente Recomendación, se inscriba en el Registro Estatal de Víctimas a **A1†,** como víctima directa de violaciones a sus derechos humanos, así como a **Q1, A2, A3, A4, T4, M1, M2, A5**, **A6 y C. K “N”**, en calidad de víctimas directas e indirectas de violaciones a derechos humanos. Asimismo, dentro del plazo máximo de un año, contado a partir de la notificación de la presente Recomendación, se indemnice a las víctimas, y se garantice su acceso oportuno Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, previsto en la Ley de Atención a Víctimas del Estado de Zacatecas. Debiendo remitir a este Organismo de Derechos Humanos, las constancias que acrediten su cumplimiento.

SEGUNDA. En un plazo no mayor de un mes, contado a partir de la notificación de la presente Recomendación, la Comisión Ejecutiva de Atención Integral a Víctimas del Estado de Zacatecas, valore y determine la atención médica y psicológica, así como la asistencia jurídica o de trabajo social que requieren **A2, A3, A4, T4, Q1, M1**; **M2, A5**, **A6 y K “N”,** por las violaciones a sus derechos humanos, así como las del joven **A1†**. Enviando a este Organismo las constancias que acrediten su cumplimiento.

TERCERA. En un máximo de un mes, a partir de la aceptación de la presente Recomendación se instruya a la Unidad de Asuntos Internos y al Órgano Interno de Control ambos de la Secretaría de Seguridad Pública para que inicie, en el ámbito de sus respectivas competencias procedimiento de responsabilidad en conta de los **CC. I3, I4, I5**, **I1** y, **I2.**

CUARTA. En materia penal, se insta a la Fiscalía General de Justicia del Estado, para que con la debida diligencia, se continúe con la investigación de los hechos que se han analizado, a efecto de que no queden impunes las violaciones a los derechos humanos de las víctimas; se cumplimente las órdenes de aprehensión en contra de los **CC. I3, I4, I5** y, en su oportunidad, se concluyan los procedimientos judiciales en contra de **I1** y **I2.**

QUINTA. Dentro del plazo máximo de tres meses, contados a partir de la aceptación de esta Recomendación, la Secretaría de Seguridad Pública capacite a los elementos de la Policía Estatal Preventiva, en temas relacionados con la obligación de éstos de garantizar el derecho a la vida privada, en relación con la inviolabilidad del domicilio; el derecho a la legalidad y seguridad jurídica, en relación al derecho a no ser objeto de detenciones ilegales y arbitrarias, ni víctimas de desaparición forzada; del derecho a la integridad y seguridad personal, en relación con el derecho a la integridad física y el derecho a la vida, así como en los derechos de las víctimas, en relación al derecho de acceso a la justicia y a la verdad.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 53, párrafo segundo de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, se hace del conocimiento de la autoridad a la que va dirigida esta Recomendación, que dispone de un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente en que ésta se le notifique, para que manifieste si la acepta o no, en el entendido de que, de no aceptarla, su respuesta se hará del conocimiento de la opinión pública. En caso de que la acepte, se le notifica que dispone de un plazo de 15 días, contados a partir del vencimiento del término del que disponía para responder sobre la aceptación, a fin de enviar las pruebas de su cumplimiento.

Por último, hágasele saber a los familiares de la parte quejosa que, de conformidad con el artículo 61 de la Ley de este Organismo, dispone de 30 días naturales, computados a partir de la fecha de notificación del presente documento, para que en caso de que exista inconformidad con la misma, interponga el recurso de impugnación correspondiente ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Así lo determina y firma

DRA. EN D. MA. DE LA LUZ DOMÍNGUEZ CAMPOS
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE ZACATECAS

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

III. Promoción y Difusión de los Derechos Humanos

El presente eje rector denominado Promoción y Difusión de los Derechos Humanos que forma parte del Plan de Desarrollo Institucional de este Organismo, establece que "La educación en derechos humanos puede definirse como el conjunto de actividades de educación, formación y difusión de información orientadas a crear una cultura universal de derechos humanos. Una educación en derechos humanos eficaz no solo proporciona conocimientos sobre los derechos humanos y los mecanismos para protegerlos, sino que, además, desarrolla las competencias y aptitudes necesarias para promover, defender y aplicar los derechos humanos en la vida cotidiana. De ese modo, la educación en derechos humanos suscita comportamientos y prácticas que promueven los derechos humanos para todos los miembros de la sociedad. Las actividades de educación en derechos humanos deben fomentar los valores fundamentales de los derechos humanos, como el respeto, la igualdad y la justicia, y afirmar la interdependencia, indivisibilidad y universalidad de los derechos humanos.[1]

La promoción de los derechos humanos es una acción indispensable para prevenir la violación a los mismos y acabar así, con cualquier forma de discriminación y exclusión social que limiten u obstaculicen su ejercicio. La educación en y para los derechos humanos, se apoya de una serie de mecanismos que van desde acciones de divulgación y capacitación, hasta el desarrollo de especialidades, que permitan a la sociedad y a los gobiernos comprender qué son los derechos humanos, cómo deben ser garantizados, ante quien deben ser exigidos y cuáles son las instancias ante quien debe solicitar su protección y defensa.

La Organización de las Naciones Unidas, ha definido a la educación en derechos humanos como "el conjunto de actividades de capacitación y difusión de información orientadas a crear una cultura universal en la esfera de los derechos humanos mediante la transmisión de conocimientos, la enseñanza de técnicas y la formación de actitudes".

La educación en derechos humanos tiene como objetivos: fortalecer el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales; desarrollar plenamente la personalidad y la dignidad humana; promover la comprensión, la tolerancia, la igualdad entre los sexos y la amistad entre todas las naciones, los pueblos indígenas y los grupos raciales, nacionales, étnicos, religiosos y lingüísticos; facilitar la participación efectiva de todas las personas en una sociedad libre y democrática en la que impere el Estado de derecho; fomentar y mantener la paz; promover un desarrollo sostenible centrado en las personas, la justicia social, la cultura de la legalidad y la democracia.

En razón a ello, esta Comisión ha decidido hacer de la educación en derechos humanos, uno de sus ejes prioritarios de actuación. Asumiendo para ello, el compromiso de diseñar un programa de capacitación que contenga, además de acciones de promoción activa, estrategias de formación que paulatinamente permitan a hombres y mujeres comprenderlos y participar efectivamente en una sociedad democrática y pluralista, que permita reformular los patrones culturales en pro de la defensa y garantía de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Por ello, este Organismo, consciente de que la educación en derechos humanos contribuye decisivamente a la realización y práctica de los mismos, ha implementado diversas acciones en materia de capacitación y difusión a fin de institucionalizar el enfoque de derechos humanos en

[1] Programa Mundial para la Educación en Derechos Humanos. Disponible en: https://www.ohchr.org/Documents/Publications/ThirdPhaseWPHREducation_SP.pdf. Fecha de consulta diciembre de 2020.

las actividades que desarrollan los poderes públicos estatales y municipales.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas en el eje de promoción y difusión de los derechos humanos, tiene 3 líneas estratégicas que son:

1. Cultura de los derechos humanos y el derecho a la igualdad.
2. Cultura de la legalidad.
3. Cultura de la paz y no violencia.

La cultura de los derechos humanos y derecho a la igualdad, se dirige principalmente a grupos vulnerables, padres de familia y sociedad civil. Tiene como objetivo fomentar el respeto a los derechos humanos y la igualdad, promoviendo el respeto a la dignidad y la no discriminación.

La cultura de la legalidad, se enfoca principalmente a los servidores públicos de los tres órdenes de gobierno, así como, elementos de seguridad pública y custodios. El objetivo es capacitar en materia de derechos humanos, responsabilidades de los servidores públicos, protección de personas y la cultura de la legalidad.

La cultura de la paz y no violencia, está dirigida a estudiantes de educación básica, media superior y superior, así como a docentes. El objetivo es orientar a niñas, niños, adolescentes, jóvenes y trabajadores de la educación, sobre la cultura de la paz y la no violencia, para fomentar la convivencia armónica en los centros educativos y el entorno.

Es necesario precisar que los años 2020 y 2021 han sido años atípicos, rodeados de una crisis sanitaria mundial inigualable, causada por el virus SARS CoV-2 (COVID-19) que modificó el entorno laboral, educativo, deportivo, de recreación y social, por lo que las personas y familias tuvieron que someterse a un confinamiento, que a finales de este año sigue vigente en diversos ámbitos y ciudades en todo el mundo. Las escuelas están cerradas y la educación presencial ha sido sustituida por la educación a distancia, basada en plataformas digitales o dispositivos electrónicos; la actividad laboral ordinaria ha sido modificada, reduciendo la jornada laboral, optando por el trabajo en casa, y muchos centros de trabajo han cerrado sus puertas a la atención directa de usuarios, fortaleciendo los servicios de atención telefónicos y digitales; además los espacios deportivos han sido cerrados y los centros recreativos también, el entorno social ha cambiado y persiste además de la crisis sanitaria, una crisis económica, social y de seguridad.

Sin embargo, a pesar de esta terrible situación la promoción de los derechos humanos no se ha detenido, porque sigue siendo una acción indispensable para prevenir la violación a los mismos, máxime en este entorno de incertidumbre.

La educación en derechos humanos en tiempos de pandemia por COVID-19 es fundamental para contribuir a que las personas desarrollen conocimientos sobre sus derechos humanos y los hagan valer con eficacia ante las autoridades e instancias gubernamentales y de la iniciativa privada y social, asimismo genera conciencia en las y los servidores públicos y autoridades encargadas de respetar, proteger y garantizar el cumplimiento de los derechos.

Por lo anterior, esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, realizó una intensa promoción y difusión de los derechos humanos a través de diversas plataformas digitales con el objetivo de difundir ampliamente los derechos humanos entre la población.

Asimismo, se realizaron campañas de difusión en diversos medios de comunicación y redes sociales en temas tales como: prevención de la violencia digital, derechos de los pueblos indígenas, derechos de niñas y mujeres a vivir libre de violencia, prevención de la trata de personas mediante la campaña internacional corazón azul, derechos de los migrantes y prevención de la discriminación, derechos de niñas, niños y adolescentes y prevención del trabajo infantil, derecho a la igualdad y no discriminación de los integrantes de la comunidad LGBTTTIQA+, derecho humano a la lactancia materna, derechos de los jóvenes, derechos de las personas adultas mayores, derechos de las personas con discapacidad y no discriminación, derecho a la salud mental y prevención del suicidio, derecho a la cultura,

Además de manera permanente se ha difundido contenidos informativos para prevenir el contagio del Coronavirus (COVID-19), transmitiendo permanentemente a la población la importancia de cumplir con las medidas sanitarias de sana distancia, uso adecuado del cubre bocas, lavado frecuente de manos, evitar aglomeraciones y quedarse en casa cuando así sea posible; asimismo se difundieron medidas para prevenir enfermedades respiratorias; todo ello con el objetivo de contribuir a la promoción de salud y evitar contagios y fallecimientos por la pandemia de COVID-19.

III.1. Acciones de Promoción y Difusión durante el Segundo semestre del año 2021

III.1.1. Personas Capacitadas

A continuación, se especifican las capacitaciones impartidas por personal de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas durante el periodo de 1 de julio al 31 de diciembre de 2021.

En el periodo que se informa se capacitaron a 2 mil 609 niñas, niños y adolescentes, 2 mil 240 jóvenes, 8 mil 407 servidores públicos, 607 padres de familia, 173 grupos de la sociedad civil y 680 grupos vulnerables. En suma, se capacitó a 14 mil 716 personas, de las cuales 7 mil 663 fueron mujeres y 7 mil 053 fueron hombres.

Concentrado de capacitaciones

Población Beneficiada	Capacitaciones otorgadas	Mujeres	Hombres	Total
Niños, niñas y adolescentes	46	1,326	1,283	2,609
Jóvenes	30	1,374	866	2,240
Servidores Públicos	366	4,102	4,305	8,407
Padres de Familia	19	506	101	607
Grupos de la sociedad civil	7	67	106	173
Grupos vulnerables	17	288	392	680
Total	485	7,663	7,053	14,716

Fuente: Elaboración de la Unidad de Planeación y Evaluación con datos proporcionados por las áreas de Capacitación y Visitadurías Regionales.
Nota 1: Estas capacitaciones fueron efectuadas por personal del Departamento de Capacitación y Visitadurías Regionales.
Nota 2: Se efectuaron 485 capacitaciones en el segundo semestre del año 2021, de las cuales, algunas se realizaron por plataformas digitales y otras de forma presencial en 43 municipios del estado.

III.1.2. Actividades de capacitación efectuadas en municipios

En el periodo del 1 de julio al 31 de diciembre de 2021 se efectuaron 485 capacitaciones en 43 municipios de la entidad, beneficiando a 14 mil 716 personas, de las cuales 7 mil 663 fueron mujeres y 7 mil 053 fueron hombres.

Capacitaciones efectuadas por Municipio en el Segundo Semestre del año 2021

No.	Municipio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
	Total de capacitaciones	70	85	70	89	105	66	485
1	Apozol					2		2
2	Apulco				2			2
3	Atolinga		3		2	7	2	14
4	Benito Juárez				1	1		2
5	Calera					2	1	3
6	Cuauhtémoc					2	1	3
7	Fresnillo						2	2
8	Trinidad García de la Cadena				2			2
9	Genaro Codina						1	1
10	General Enrique Estrada					2	1	3
11	General Francisco R. Murguía					2	2	4
12	Guadalupe	12	6	5	9	6	5	43
13	Huanusco					1		1
14	Jalpa					7	5	12
15	Jerez de García Salinas		1			9		10
16	Juan Aldama					2		2
17	Juchipila					1	1	2
18	Loreto		1					1
19	Luis Moya					2		2
20	Mezquital del Oro						1	1

No.	Municipio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
21	Miguel Auza	1				3		4
22	Momax						1	1
23	Monte Escobedo					1		1
24	Morelos		1				1	2
25	Moyahua de Estrada					1	1	2
26	Nochistlán de Mejía			6				6
27	Noria de Ángeles					1		1
28	Pinos				5	4	4	13
29	Río Grande	6	9	8	7	6	7	43
30	Saín Alto					1	1	2
31	Sombrerete					1		1
32	Susticacán			1				1
33	Trancoso			1	2			3
34	Tabasco				3			3
35	Tepechitlán					1		1
36	Tepetongo					1		1
37	Teúl de González Ortega					1		1
38	Tlaltenango de Sánchez Román					1		1
39	Valparaíso				2			2
40	Vetagrande						1	1
41	Villanueva						2	2
42	Santa María de la Paz					2		2
43	Zacatecas	51	64	49	54	35	26	279

Fuente: Elaboración de la Unidad de Planeación y Evaluación con datos proporcionados por las áreas de Capacitación y Visitadurías Regionales.
Nota 1: Estas capacitaciones fueron efectuadas por personal del Departamento de Capacitación y Visitadurías Regionales
Nota 2: Algunas capacitaciones se realizaron por plataformas digitales y otras de forma presencial en los municipios del estado de Zacatecas.
Los datos comprenden la información del 1 de julio al 31 de diciembre de 2021.

III.1.3. Servidores públicos capacitados por la CDHEZ

En el periodo del 1 de julio al 31 de diciembre de 2021 se capacitaron a 4 mil 102 servidoras públicas y 4 mil 305 servidores públicos, siendo la población beneficiada de 8 mil 407 personas.

Funcionarios públicos que participaron en cursos, talleres, foros, conferencias, exposiciones o presentaciones, organizados por la CDHEZ o en colaboración con otras instituciones

Tipo de Instituciones	Total de Funcionarios (as) que participaron en Cursos y Capacitaciones		
	Mujeres	Hombres	Total
Cuerpos de Seguridad Pública federales, estatales y municipales	1,076	2,113	3,189
Instituciones de Salud	713	312	1,025
Instituciones de Educación	505	539	1,044
Otras Instituciones federales	39	43	82
Otras Instituciones estatales	899	643	1,542
Otras Instituciones municipales	870	655	1,525
Total	4,102	4,305	8,407

Fuente: Elaboración de la Unidad de Planeación y Evaluación con datos proporcionados por el área de Capacitación y visitadurías regionales.
Los datos comprenden del 1 de julio al 31 de diciembre de 2021.

En el periodo que se informa se efectuaron 366 capacitaciones a servidoras y servidores públicos.

Capacitaciones a Servidores Públicos

No.	Tema	Institución	Municipio	Mujeres	Hombres	Total	Fecha
1	Conversatorio Paridad en todo; avances y retos. Respeto, igualdad y participación de mujeres en todos los ámbitos, incluido el político	Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, Secretaría de las Mujeres y Red Plural de Mujeres Zacatecanas	Zacatecas, Zacatecas	112	79	191	11 de enero de 2021
2	Cultura de la Paz	Instituto de Inclusión para personas con Discapacidad y la Asociación "Emprende con Causa Asociación Civil	Zacatecas, Zacatecas	22	17	39	19 de febrero de 2021

No.	Tema	Institución	Municipio	Mujeres	Hombres	Total	Fecha
3	Legislación en materia de archivos	Dirección General de Archivos del Estado de Zacatecas y el Grupo de Archivistas de Zacatecas	Zacatecas, Zacatecas	49	26	75	25 de marzo de 2021
4	Niñas, niños y adolescentes y sus Derecho Humanos a un Medio Ambiente Sano y digno. Análisis de amparo en revisión 307/2016	Instituciones de Gobierno Estatal y Federal	Zacatecas, Zacatecas	37	28	65	28 de abril de 2021
5	Día Internacional de lucha contra la homofobia, lesbofobia, bifobia y transfobia	Instituciones de Gobierno Estatal	Zacatecas, Zacatecas	26	18	44	18 de mayo de 2021
6	A 10 años de la Reforma Constitucional de Derechos Humanos.	Federación Mexicana de Organismos Públicos de	Zacatecas, Zacatecas	14	21	35	21 de mayo de 2021
7	Protocolo para Prevenir el Hostigamiento, Acoso y Discriminación	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	6	9	15	1 de julio de 2021
8	Responsabilidades de los servidores públicos	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	6	9	15	1 de julio de 2021
9	Protección de Derechos Humanos	Secundaria Técnica No. 73 Matías Ramos	Guadalupe, Zacatecas	12	9	21	2 de julio de 2021
10	Reglas Mandela	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	7	9	16	2 de julio de 2021
11	Prevención de la Tortura	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	7	9	16	2 de julio de 2021
12	Derechos Humanos y Seguridad Jurídica, Derechos a la Legalidad y Seguridad Personal	Secretaría de Seguridad Pública (SSP)	Guadalupe, Zacatecas	3	4	7	2 de julio de 2021
13	ABC de los Derechos Humanos	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	5	12	17	5 de julio de 2021

No.	Tema	Institución	Municipio	Mujeres	Hombres	Total	Fecha
14	Trata de Personas	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	5	12	17	5 de julio de 2021
15	Protocolo para Prevenir el Hostigamiento, Acoso y Discriminación	Secretaría de Salud del Estado de Zacatecas (SSZ)	Zacatecas, Zacatecas	34	15	49	5 de julio de 2021
16	Derechos Humanos y Seguridad Jurídica	Secretaría de Seguridad Pública (SSP)	Guadalupe, Zacatecas	4	14	18	6 de julio de 2021
17	Derechos de las Víctimas	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	5	12	17	6 de julio de 2021
18	Violencia de Género	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	5	12	17	6 de julio de 2021
19	Código de Conducta	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	5	12	17	7 de julio de 2021
20	Uso legítimo de la fuerza	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	5	12	17	7 de julio de 2021
21	Protocolos para prevenir el acoso y abuso sexual en l escuela	Secundaria General Juan Pablo García	Guadalupe, Zacatecas	17	13	30	8 de julio de 2021
22	Protocolo para Prevenir el Hostigamiento, Acoso y Discriminación	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	5	12	17	8 de julio de 2021
23	Responsabilidades de los servidores públicos	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	5	12	17	8 de julio de 2021
24	Reglas Mandela	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	5	12	17	9 de julio de 2021
25	Prevención de la Tortura	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	5	12	17	9 de julio de 2021
26	Derechos Humanos y Seguridad Jurídica	Secretaría de Seguridad Pública (SSP)	Guadalupe, Zacatecas	1	6	7	9 de julio de 2021
27	Inteligencia Emocional	Servicio Nacional del Empleo (SNE)	Río Grande, Zacatecas	5	4	9	9 de julio de 2021
28	ABC de los Derechos Humanos	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	6	11	17	12 de julio de 2021
29	Trata de Personas	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	6	11	17	12 de julio de 2021
30	Derechos de las Víctimas	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	6	11	17	13 de julio de 2021
31	Violencia de Género	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	6	11	17	13 de julio de 2021

No.	Tema	Institución	Municipio	Mujeres	Hombres	Total	Fecha
32	Derechos Humanos y Seguridad Jurídica	Secretaría de Seguridad Pública (SSP)	Guadalupe, Zacatecas	0	10	10	13 de julio de 2021
33	Inteligencia Emocional	Escuela Secundaria Gral. No 2	Río Grande, Zacatecas	10	8	18	13 de julio de 2021
34	Protocolo para Prevenir el Hostigamiento, Acoso y Discriminación	Secretaría de Salud del Estado de Zacatecas (SSZ)	Zacatecas, Zacatecas	9	21	30	14 de julio de 2021
35	Código de Conducta	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	6	11	17	14 de julio de 2021
36	Uso legítimo de la fuerza	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	6	11	17	14 de julio de 2021
37	Inteligencia Emocional	Presidencia Municipal de Miguel Auza	Miguel Auza, Zacatecas	14	10	24	14 de julio de 2021
38	Protocolo para Prevenir el Hostigamiento, Acoso y Discriminación	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	6	11	17	15 de julio de 2021
39	Responsabilidades de los servidores públicos	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	6	11	17	15 de julio de 2021
40	Inteligencia Emocional	Escuela Secundaria Gral. No 1	Río Grande, Zacatecas	26	23	49	15 de julio de 2021
41	Reglas Mandela	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	6	11	17	16 de julio de 2021
42	Prevención de la Tortura	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	6	11	17	16 de julio de 2021
43	Derechos Humanos y Seguridad Jurídica	Secretaría de Seguridad Pública (SSP)	Guadalupe, Zacatecas	0	9	9	16 de julio de 2021
44	Derecho al uso del Internet y las Redes Sociales	Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia	Río Grande, Zacatecas	7	3	10	16 de julio de 2021
45	Derecho al uso del Internet y las Redes Sociales	Dirección Regional 05 Federal Secretaría de Educación	Río Grande, Zacatecas	10	7	17	16 de julio de 2021
46	ABC de los Derechos Humanos	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	7	10	17	19 de julio de 2021
47	Trata de Personas	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	7	10	17	19 de julio de 2021

No.	Tema	Institución	Municipio	Mujeres	Hombres	Total	Fecha
48	Derechos de las Víctimas	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	7	10	17	20 de julio de 2021
49	Violencia de Género	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	7	10	17	20 de julio de 2021
50	Derechos Humanos y Seguridad Jurídica	Secretaría de Seguridad Pública (SSP)	Guadalupe, Zacatecas	0	10	10	20 de julio de 2021
51	Código de Conducta	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	7	10	17	21 de julio de 2021
52	Uso legítimo de la fuerza	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	7	10	17	21 de julio de 2021
53	Protocolo para Prevenir el Hostigamiento, Acoso y Discriminación	Secretaría de Salud del Estado de Zacatecas (SSZ)	Zacatecas, Zacatecas	83	15	98	21 de julio de 2021
54	Protocolo para Prevenir el Hostigamiento, Acoso y Discriminación	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	7	10	17	22 de julio de 2021
55	Responsabilidades de los servidores públicos	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	7	10	17	22 de julio de 2021
56	Reglas Mandela	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	7	10	17	23 de julio de 2021
57	Prevención de la Tortura	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	7	10	17	23 de julio de 2021
58	Derechos Humanos y Seguridad Jurídica	Secretaría de Seguridad Pública (SSP)	Guadalupe, Zacatecas	1	12	13	23 de julio de 2021
59	ABC de los Derechos Humanos	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	6	12	18	26 de julio de 2021
60	Trata de Personas	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	6	12	18	26 de julio de 2021
61	Curso de Introducción al Bioderecho	Diversos servidores públicos de la Universidad Autónoma de Zacatecas y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas	Zacatecas, Zacatecas	24	12	36	27 de julio de 2021
62	Derechos de las Víctimas	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	6	12	18	27 de julio de 2021
63	Violencia de Género	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	6	12	18	27 de julio de 2021

No.	Tema	Institución	Municipio	Mujeres	Hombres	Total	Fecha
64	Derechos Humanos y Seguridad Jurídica	Secretaría de Seguridad Pública (SSP)	Guadalupe, Zacatecas	1	9	10	27 de julio de 2021
65	Protocolo para Prevenir el Hostigamiento, Acoso y Discriminación	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	6	12	18	28 de julio de 2021
66	Responsabilidades de los servidores públicos	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	6	12	18	28 de julio de 2021
67	Código de Conducta	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	6	12	18	29 de julio de 2021
68	Uso legítimo de la fuerza	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	6	12	18	29 de julio de 2021
69	ABC de los derechos humanos	Sindicato del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)	Zacatecas, Zacatecas	9	18	27	30 de julio de 2021
70	Relaciones Humanas	Sindicato del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)	Zacatecas, Zacatecas	9	18	27	30 de julio de 2021
71	Reglas Mandela	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	6	12	18	30 de julio de 2021
72	Prevención de la Tortura	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	6	12	18	30 de julio de 2021
73	Derechos Humanos y Seguridad Jurídica	Secretaría de Seguridad Pública (SSP)	Guadalupe, Zacatecas	4	10	14	3 de agosto de 2021
74	ABC de los Derechos Humanos	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	3	13	16	3 de agosto de 2021
75	Trata de Personas	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	3	13	16	3 de agosto de 2021
76	Código de Conducta	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	4	14	18	4 de agosto de 2021
77	Uso legítimo de la fuerza	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	4	14	18	4 de agosto de 2021
78	Violencia de Género	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	4	14	18	5 de agosto de 2021
79	Protocolo para Prevenir el Hostigamiento, Acoso y Discriminación	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	4	14	18	5 de agosto de 2021

No.	Tema	Institución	Municipio	Mujeres	Hombres	Total	Fecha
80	Derechos Humanos y Atención de la salud	Secretaría de Salud del Estado de Zacatecas (SSZ)	Zacatecas, Zacatecas	36	14	50	5 de agosto de 2021
81	Derechos Humanos y Seguridad Jurídica	Secretaría de Seguridad Pública (SSP)	Guadalupe, Zacatecas	0	4	4	6 de agosto de 2021
82	Reglas Mandela	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	2	14	16	6 de agosto de 2021
83	Prevención de la Tortura	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	2	14	16	6 de agosto de 2021
84	ABC de los derechos humanos	Instituto de Selección y Capacitación (INSELCAP)	Zacatecas, Zacatecas	15	4	19	9 de agosto de 2021
85	ABC de los Derechos Humanos	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	2	13	15	9 de agosto de 2021
86	Trata de Personas	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	2	13	15	9 de agosto de 2021
87	ABC de los derechos humanos	Instituto de Selección y Capacitación (INSELCAP)	Zacatecas, Zacatecas	15	4	19	10 de agosto de 2021
88	Derechos de las Víctimas	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	4	13	17	10 de agosto de 2021
89	Violencia de Género	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	4	13	17	10 de agosto de 2021
90	Prevención de Violencia hacia las mujeres	Instituto de Selección y Capacitación (INSELCAP)	Zacatecas, Zacatecas	15	4	19	11 de agosto de 2021
91	Código de Conducta	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	4	14	18	11 de agosto de 2021
92	Uso legítimo de la fuerza	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	4	14	18	11 de agosto de 2021
93	Protocolo para Prevenir el Hostigamiento, Acoso y Discriminación	Instituto de Selección y Capacitación (INSELCAP)	Zacatecas, Zacatecas	15	4	19	12 de agosto de 2021
94	Protocolo para Prevenir el Hostigamiento, Acoso y Discriminación	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	4	14	18	12 de agosto de 2021
95	Responsabilidades de los servidores públicos	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	4	14	18	12 de agosto de 2021

No.	Tema	Institución	Municipio	Mujeres	Hombres	Total	Fecha
96	Equidad de Género y derechos de la mujer	Instituto de Selección y Capacitación (INSELCAP)	Zacatecas, Zacatecas	15	4	19	13 de agosto de 2021
97	Reglas Mandela	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	4	14	18	13 de agosto de 2021
98	Prevención de la Tortura	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	4	14	18	13 de agosto de 2021
99	Derechos Humanos y Seguridad Jurídica	Secretaría de Seguridad Pública (SSP)	Guadalupe, Zacatecas	6	11	17	13 de agosto de 2021
100	ABC de los Derechos Humanos	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	4	12	16	16 de agosto de 2021
101	Trata de Personas	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	4	12	16	16 de agosto de 2021
102	Derechos Humanos, Seguridad Jurídica y Libertad personal	Dirección de Seguridad Pública	Jerez, Zacatecas	2	8	10	16 de agosto de 2021
103	Derechos de las Víctimas	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	4	12	16	17 de agosto de 2021
104	Violencia de Género	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	4	12	16	17 de agosto de 2021
105	Derechos de la niñez y adolescencia al honor, reputación y vida privada	Protección Civil	Zacatecas, Zacatecas	2	5	7	17 de agosto de 2021
106	Derechos Humanos y Atención de la salud	Secretaría de Salud del Estado de Zacatecas (SSZ)	Zacatecas, Zacatecas	35	3	38	18 de agosto de 2021
107	Código de Conducta	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	4	12	16	18 de agosto de 2021
108	Uso legítimo de la fuerza	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	4	12	16	18 de agosto de 2021
109	Protocolo para Prevenir el Hostigamiento, Acoso y Discriminación	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	4	12	16	19 de agosto de 2021
110	Responsabilidades de los servidores públicos	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	4	12	16	19 de agosto de 2021
111	Derechos Humanos y Seguridad Jurídica	Secretaría de Seguridad Pública (SSP)	Guadalupe, Zacatecas	0	7	7	20 de agosto de 2021
112	Derecho a la Igualdad y No Discriminación	Hospital General de Loreto	Loreto, Zacatecas	22	9	31	20 de agosto de 2021

No.	Tema	Institución	Municipio	Mujeres	Hombres	Total	Fecha
113	Reglas Mandela	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	4	12	16	20 de agosto de 2021
114	Prevención de la Tortura	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	4	12	16	20 de agosto de 2021
115	Responsabilidades de los servidores públicos	Registro Agrario Nacional (RAN)	Zacatecas, Zacatecas	17	12	29	20 de agosto de 2021
116	ABC de los Derechos Humanos	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	6	12	18	23 de agosto de 2021
117	Trata de Personas	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	6	12	18	23 de agosto de 2021
118	Salud Mental y Derechos Humanos	Jardín de Niños Roberto Ramos Dávila	Guadalupe, Zacatecas	6	2	8	23 de agosto de 2021
119	Derechos de las Víctimas	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	6	10	16	24 de agosto de 2021
120	Violencia de Género	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	6	10	16	24 de agosto de 2021
121	ABC de los Derechos Humanos	Ayuntamiento Morelos	Morelos, Zacatecas	20	8	28	24 de agosto de 2021
122	Derechos Humanos y Seguridad Jurídica	Secretaría de Seguridad Pública (SSP)	Guadalupe, Zacatecas	1	13	14	24 de agosto de 2021
123	Código de Conducta	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	6	10	16	25 de agosto de 2021
124	Uso legítimo de la fuerza	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	6	10	16	25 de agosto de 2021
125	Protocolo para Prevenir el Hostigamiento, Acoso y Discriminación	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	6	10	16	26 de agosto de 2021
126	Responsabilidades de los servidores públicos	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	6	10	16	26 de agosto de 2021
127	Reglas Mandela	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	6	10	16	27 de agosto de 2021
128	Prevención de la Tortura	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	6	10	16	27 de agosto de 2021
129	ABC de los derechos humanos y derecho a la salud	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)	Zacatecas, Zacatecas	46	23	69	27 de agosto de 2021
130	ABC de los Derechos Humanos	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	5	11	16	30 de agosto de 2021
131	Trata de Personas	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	5	11	16	30 de agosto de 2021

No.	Tema	Institución	Municipio	Mujeres	Hombres	Total	Fecha
132	Derechos Humanos y Atención de la salud	Secretaría de Salud del Estado de Zacatecas (SSZ)	Zacatecas, Zacatecas	32	24	56	30 de agosto de 2021
133	Derechos de las Víctimas	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	5	11	16	31 de agosto de 2021
134	Violencia de Género	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	5	11	16	31 de agosto de 2021
135	Código de Conducta	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	5	11	16	1 de septiembre de 2021
136	Uso Adecuado de la Fuerza	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	5	11	16	1 de septiembre de 2021
137	Protocolo Hostigamiento y Acoso Sexual	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	5	11	16	2 de septiembre de 2021
138	Responsabilidades de los Servidores Públicos	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	5	11	16	2 de septiembre de 2021
139	Reglas Mandela	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	5	11	16	3 de septiembre de 2021
140	Prevención de la Tortura	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	5	11	16	3 de septiembre de 2021
141	Respeto y Valores	Archivo y Museo Municipal	Río Grande, Zacatecas	4	3	7	6 de septiembre de 2021
142	ABC de los Derechos Humanos	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	6	9	15	6 de septiembre de 2021
143	Trata de Personas	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	6	9	15	6 de septiembre de 2021
144	Derechos de las Víctimas	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	6	9	15	7 de septiembre de 2021
145	Violencia de Género	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	6	9	15	7 de septiembre de 2021
146	Protocolo Hostigamiento y Acoso Sexual	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	6	9	15	8 de septiembre de 2021
147	Responsabilidades de los Servidores Públicos	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	6	9	15	8 de septiembre de 2021
148	Prevención de la Tortura	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	6	9	15	9 de septiembre de 2021
149	Reglas Mandela	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	6	9	15	9 de septiembre de 2021
150	El papel de los Organismos de Protección de Derechos Humanos ante el impacto de la pandemia del COVID-19 en los derechos humanos de las mujeres	Organismos Públicos de Derechos Humanos	Zacatecas, Zacatecas	83	69	152	9 de septiembre de 2021

No.	Tema	Institución	Municipio	Mujeres	Hombres	Total	Fecha
151	Derechos Humanos y Seguridad Jurídica	Dirección de Seguridad Pública	Guadalupe, Zacatecas	2	16	18	10 de septiembre de 2021
152	Código de Conducta para personal de seguridad	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	6	9	15	10 de septiembre de 2021
153	Uso Adecuado de la Fuerza	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	6	9	15	10 de septiembre de 2021
154	ABC de Derechos Humanos, Derecho a la igualdad y no discriminación	Sindicato del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)	Zacatecas, Zacatecas	0	6	6	10 de septiembre de 2021
155	ABC de los Derechos Humanos	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	5	9	14	13 de septiembre de 2021
156	Trata de Personas	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	5	9	14	13 de septiembre de 2021
157	Código de Conducta para personal de seguridad	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	5	9	14	14 de septiembre de 2021
158	Uso Adecuado de la Fuerza	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	5	9	14	14 de septiembre de 2021
159	Derechos Humanos y Atención de la salud	Secretaría de Salud del Estado de Zacatecas	Zacatecas, Zacatecas	71	20	91	14 de septiembre de 2021
160	Protocolo Hostigamiento y Acoso Sexual	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	5	9	14	15 de septiembre de 2021
161	Violencia de Género	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	5	9	14	15 de septiembre de 2021
162	Reglas Mandela	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	5	9	14	17 de septiembre de 2021
163	Prevención de la Tortura	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	5	9	14	17 de septiembre de 2021
164	Derechos Humanos y Seguridad Jurídica	Dirección de Seguridad Pública	Guadalupe, Zacatecas	1	10	11	17 de septiembre de 2021
165	ABC de los Derechos Humanos	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	4	8	12	20 de septiembre de 2021
166	Trata de Personas	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	4	8	12	20 de septiembre de 2021
167	Derechos Humanos y Seguridad Jurídica	Dirección de Seguridad Pública	Guadalupe, Zacatecas	4	6	10	21 de septiembre de 2021
168	Derechos de las Víctimas	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	4	8	12	21 de septiembre de 2021

No.	Tema	Institución	Municipio	Mujeres	Hombres	Total	Fecha
169	Violencia de Género	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	4	8	12	21 de septiembre de 2021
170	Código de Conducta para personal de seguridad	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	4	8	12	22 de septiembre de 2021
171	Uso Adecuado de la Fuerza	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	4	8	12	22 de septiembre de 2021
172	Protocolo Hostigamiento y Acoso Sexual	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	4	8	12	23 de septiembre de 2021
173	Responsabilidades de los Servidores Públicos	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	4	8	12	23 de septiembre de 2021
174	Derechos Humanos y COVID-19	Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial (CECATI)	Plataforma Google Meet	32	16	48	23 de septiembre de 2021
175	Derechos Humanos y Proceso de Atención a la Salud	Jurisdicción de Jalpa Servicios de Salud del Estado de Zacatecas (SSZ)	Plataforma Telmex	30	2	32	24 de septiembre de 2021
176	Derechos Humanos y Seguridad Jurídica	Dirección de Seguridad Pública	Guadalupe, Zacatecas	0	8	8	24 de septiembre de 2021
177	Reglas Mandela	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	5	8	13	24 de septiembre de 2022
178	Prevención de la Tortura	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	5	8	13	24 de septiembre de 2021
179	ABC de los Derechos Humanos	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	8	6	14	27 de septiembre de 2021
180	Trata de Personas	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	8	6	14	27 de septiembre de 2021
181	Derechos Humanos y Seguridad Jurídica	Dirección de Seguridad Pública	Guadalupe, Zacatecas	0	8	8	28 de septiembre de 2021
182	Violencia de Género	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	8	6	14	28 de septiembre de 2021
183	Derechos de las Víctimas	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	8	6	14	28 de septiembre de 2021
184	Uso Adecuado de la Fuerza	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	8	6	14	29 de septiembre de 2021
185	Código de Conducta para personal de seguridad	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	8	6	14	29 de septiembre de 2021

No.	Tema	Institución	Municipio	Mujeres	Hombres	Total	Fecha
186	Responsabilidades de los Servidores Públicos	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	8	6	14	30 de septiembre de 2021
187	Protocolo Hostigamiento y Acoso Sexual	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	8	6	14	30 de septiembre de 2021
188	Derechos Humanos y Seguridad Jurídica	Policía Estatal Preventiva	Guadalupe, Zacatecas	3	4	7	1 de octubre de 2021
189	Reglas Mandela	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	8	6	14	1 de octubre de 2021
190	Prevención de la Tortura	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	8	6	14	1 de octubre de 2021
191	ABC de los Derechos Humanos	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	5	9	14	4 de octubre de 2021
192	Trata de Personas	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	5	9	14	4 de octubre de 2021
193	Derechos Humanos y Seguridad Jurídica	Policía Estatal Preventiva	Guadalupe, Zacatecas	0	7	7	5 de octubre de 2021
194	Violencia de Género	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	5	9	14	5 de octubre de 2021
195	Derechos de las Víctimas	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	5	9	14	5 de octubre de 2021
196	465 Aniversario luctuoso de Francisco Tenamaxtle	Servidores públicos de diversas instituciones	Zacatecas, Zacatecas	19	26	45	6 de octubre de 2021
197	Uso Adecuado de la Fuerza	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	5	9	14	6 de octubre de 2021
198	Código de Conducta para personal de seguridad	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	5	9	14	6 de octubre de 2021
199	Igualdad de género	Guardería Chiquilandia	Jerez, Zacatecas	22	2	24	7 de octubre de 2021
200	Responsabilidades de los Servidores Públicos	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	5	9	14	7 de octubre de 2021
201	Protocolo Hostigamiento y Acoso Sexual	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	5	9	14	7 de octubre de 2021
202	Dignidad, Derechos humanos e Igualdad	V Congreso Nacional de Bioética y X Aniversario del Consejo Estatal de Bioética	Nochistlán, Zacatecas	15	10	25	8 de octubre de 2021

No.	Tema	Institución	Municipio	Mujeres	Hombres	Total	Fecha
203	Derechos Humanos y Seguridad Jurídica	Dirección de Policía de Seguridad y Vial, así como Policía Estatal Preventiva	Guadalupe, Zacatecas	1	12	13	8 de octubre de 2021
204	Reglas Mandela	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	5	9	14	8 de octubre de 2021
205	Prevención de la Tortura	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	5	9	14	8 de octubre de 2021
206	Ley de Responsabilidad Administrativa	Directores de la Presidencia	Río Grande, Zacatecas	19	26	45	8 de octubre de 2021
207	Prevención de la Trata de Personas	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	5	6	11	11 de octubre de 2021
208	ABC de los Derechos Humanos	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	5	6	11	11 de octubre de 2021
209	Igualdad Inclusión y Multiculturalidad	Promotores de Salud Comunitaria Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)	Zacatecas, Zacatecas	0	8	8	11 de octubre de 2021
210	Derechos Humanos y COVID-19	Promotores de Salud Comunitaria Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)	Zacatecas, Zacatecas	0	8	8	11 de octubre de 2021
211	Violencia de Género	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	5	6	11	12 de octubre de 2021
212	Derechos de las Víctimas	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	5	6	11	12 de octubre de 2021
213	Derechos Humanos y Seguridad Jurídica	Policía Estatal Preventiva	Guadalupe, Zacatecas	2	10	12	12 de octubre de 2021
214	Inteligencia Emocional	Dirección de Seguridad Pública	Río Grande, Zacatecas	3	17	20	13 de octubre de 2021
215	Uso Adecuado de la Fuerza	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	5	6	11	13 de octubre de 2021
216	Código de Conducta para personal de seguridad	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	5	6	11	13 de octubre de 2021
217	Responsabilidades de los Servidores Públicos	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	5	6	11	14 de octubre de 2021

No.	Tema	Institución	Municipio	Mujeres	Hombres	Total	Fecha
218	Protocolo Hostigamiento y Acoso Sexual	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	5	6	11	14 de octubre de 2021
219	Derechos Humanos y Proceso de Atención a la Salud	Secretaría de Salud del Estado de Zacatecas, Jurisdicción Jalpa, Río Grande y Concepción del Oro	Zacatecas, Zacatecas	27	15	42	14 de octubre de 2021
220	Foro de Planeación Municipal con perspectiva de Derechos Humanos	Presidencia del Estado de Zacatecas	Zacatecas, Zacatecas	71	88	159	15 de octubre de 2021
221	Reglas Mandela	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	5	6	11	15 de octubre de 2021
222	Prevención de la Tortura	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	5	6	11	15 de octubre de 2021
223	Derechos Humanos y Seguridad Jurídica	Dirección de Policía de Seguridad y Vial, así como Policía Estatal Preventiva	Guadalupe, Zacatecas	1	9	10	15 de octubre de 2021
224	Inteligencia Emocional	Secretaría de Salud del Estado de Zacatecas, Jurisdicción de Jalpa	Zacatecas, Zacatecas	57	23	80	15 de octubre de 2021
225	Derechos de las personas con Enfermedades Mentales	Secretaría de Salud del Estado de Zacatecas, Jurisdicción de Jalpa	Zacatecas, Zacatecas	57	23	80	15 de octubre de 2021
226	Derechos Humanos: Retos y Perspectivas en el Mundo Moderno. Un enfoque desde las Defensorías Públicas de Derechos Humanos, convocado por la FMOPDH Zona Oeste	Organismos Públicos de Derechos Humanos	Zacatecas, Zacatecas	13	17	30	15 de octubre de 2021
227	Planes municipales de Desarrollo con Enfoque de Derechos Humanos	Presidencia del Estado de Zacatecas	Zacatecas, Zacatecas	15	13	28	18 de octubre de 2021

No.	Tema	Institución	Municipio	Mujeres	Hombres	Total	Fecha
228	Trata de Personas	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	3	8	11	18 de octubre de 2021
229	ABC de los Derechos Humanos	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	3	8	11	18 de octubre de 2021
230	Violencia de Género	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	3	8	11	19 de octubre de 2021
231	Derechos de las Víctimas	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	3	8	11	19 de octubre de 2021
232	Derechos Humanos y Seguridad Jurídica	Dirección de Policía de Seguridad y Vial, así como Policía Estatal Preventiva	Guadalupe, Zacatecas	2	11	13	19 de octubre de 2021
233	El ABC de los Derechos Humanos	Archivo Histórico Municipal	Río Grande, Zacatecas	4	5	9	20 de octubre de 2021
234	Uso Adecuado de la Fuerza	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	3	8	11	20 de octubre de 2021
235	Código de Conducta para personal de seguridad	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	3	8	11	20 de octubre de 2021
236	ABC de los Derechos Humanos	Presidencia de Apulco	Apulco, Zacatecas	48	39	87	21 de octubre de 2021
237	ABC de los Derechos Humanos	Presidencia de Nochistlán	Nochistlán, Zacatecas	74	33	107	21 de octubre de 2021
238	Derechos Humanos y Seguridad Pública	Dirección de Seguridad Pública	Nochistlán, Zacatecas	3	10	13	21 de octubre de 2021
239	Igualdad, No Discriminación y el Derecho a la Salud	Cuerpo de Gobierno del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)	Zacatecas, Zacatecas	7	5	12	21 de octubre de 2021
240	Ley de Responsabilidad Administrativa	Instituto para la Educación de los Adultos	Río Grande, Zacatecas	15	5	20	22 de octubre de 2021
241	Prevención de la Tortura	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	3	8	11	22 de octubre de 2021
242	Reglas Mandela	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	3	8	11	22 de octubre de 2021
243	Inteligencia Emocional	Registro Agrario Nacional (RAN)	Zacatecas, Zacatecas	17	20	37	22 de octubre de 2021
244	ABC de los Derechos Humanos	Presidencia de Jerez	Jerez, Zacatecas	23	27	50	22 de octubre de 2021
245	ABC de los Derechos Humanos	Presidencia de Susticacán	Susticacán, Zacatecas	6	4	10	22 de octubre de 2021

No.	Tema	Institución	Municipio	Mujeres	Hombres	Total	Fecha
246	Derechos Humanos y Seguridad Jurídica	Dirección de Policía de Seguridad y Vial, así como Policía Estatal Preventiva	Guadalupe, Zacatecas	3	10	13	26 de octubre de 2021
247	Violencia de Género	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	0	9	9	26 de octubre de 2021
248	Derechos de las Víctimas	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	0	9	9	26 de octubre de 2021
249	ABC de los Derechos Humanos	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	0	9	9	26 de octubre de 2021
250	Ponencia sobre Derechos Humanos en fotos temáticos para le elaboración del Plan Estatal de Desarrollo	Servidores públicos de diversas instituciones estatales	Zacatecas, Zacatecas	63	37	100	26 de octubre de 2021
251	Ley de Responsabilidad Administrativa	Dirección de Seguridad Vial	Río Grande, Zacatecas	4	6	10	27 de octubre de 2021
252	Uso Adecuado de la Fuerza	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	0	9	9	27 de octubre de 2021
253	Código de Conducta para personal de seguridad	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	0	9	9	27 de octubre de 2021
254	Protocolo Hostigamiento y Acoso Sexual	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas		9	9	28 de octubre de 2021
255	Responsabilidades de los Servidores Públicos	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas		9	9	28 de octubre de 2021
256	ABC de los Derechos Humanos	Presidencia de García de la Cadena	García de a Cadena, Zacatecas	5	5	10	28 de octubre de 2021
257	ABC de los Derechos Humanos	Presidencia de Florencia de Benito Juárez	Florencia de Benito Juárez, Zacatecas	9	6	15	28 de octubre de 2021
258	Prevención de la Tortura	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas		9	9	29 de octubre de 2021
259	Reglas Mandela	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas		9	9	29 de octubre de 2021
260	ABC de los Derechos Humanos	Presidencia de Trancoso	Trancoso, Zacatecas	10	14	24	29 de octubre de 2021
261	Derechos Humanos y Seguridad Jurídica	Dirección de Seguridad Pública	Trancoso, Zacatecas	3	5	8	29 de octubre de 2021

No.	Tema	Institución	Municipio	Mujeres	Hombres	Total	Fecha
262	Derechos Humanos y Seguridad Jurídica	Dirección de Policía de Seguridad y Vial, así como Policía Estatal Preventiva	Guadalupe, Zacatecas	1	9	10	29 de octubre de 2021
263	Equidad de Género	Secretaría de Comunicaciones y Transportes	Guadalupe, Zacatecas	5	11	16	1 de noviembre de 2021
264	Violencia de Género	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	1	5	6	1 de noviembre de 2021
265	ABC de los Derechos Humanos	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	1	5	6	1 de noviembre de 2021
266	Código de Conducta para personal de seguridad	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	1	5	6	3 de noviembre de 2021
267	Uso Adecuado de la Fuerza	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	1	5	6	3 de noviembre de 2021
268	ABC de los Derechos Humanos	Presidencia de Tabasco	Tabasco, Zacatecas	3	5	8	3 de noviembre de 2021
269	ABC de los Derechos Humanos	Presidencia de Tabasco	Tabasco, Zacatecas	8	4	12	3 de noviembre de 2021
270	Derechos Humanos en el Proceso de atención a la salud	Servicios de Salud del Estado de Zacatecas	Zacatecas, Zacatecas	43	13	56	4 de noviembre de 2021
271	Protocolo Hostigamiento y Acoso Sexual	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	1	5	6	4 de noviembre de 2021
272	Responsabilidades de los Servidores Públicos	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	1	5	6	4 de noviembre de 2021
273	ABC de los Derechos Humanos	Presidencia de Jalpa	Jalpa, Zacatecas	5	8	13	4 de noviembre de 2021
274	ABC de los Derechos Humanos	Presidencia de Huanusco	Huanusco, Zacatecas	3	5	8	4 de noviembre de 2021
275	Derechos Humanos y Seguridad Jurídica	Dirección de Seguridad Pública	Guadalupe, Zacatecas	8	18	26	5 de noviembre de 2021
276	Reglas Mandela	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	1	5	6	5 de noviembre de 2021
277	Tortura	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	1	5	6	5 de noviembre de 2021
278	ABC de los Derechos Humanos	Presidencia de Mezquital del Oro	Mezquital del Oro, Zacatecas	7	7	14	5 de noviembre de 2021
279	ABC de los Derechos Humanos	Presidencia de Moyahua	Moyahua, Zacatecas	15	6	21	5 de noviembre de 2021

No.	Tema	Institución	Municipio	Mujeres	Hombres	Total	Fecha
280	ABC de los Derechos Humanos	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	4	4	8	8 de noviembre de 2021
281	Trata de Personas	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	4	4	8	8 de noviembre de 2021
282	Derechos Humanos y Seguridad Jurídica	Dirección de Seguridad Pública	Guadalupe, Zacatecas	6	10	16	9 de noviembre de 2021
283	Código de Conducta para personal de seguridad	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	4	4	8	9 de noviembre de 2021
284	Uso Adecuado de la Fuerza	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	4	4	8	9 de noviembre de 2021
285	Violencia de Género	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	4	4	8	9 de noviembre de 2021
286	Ley de Responsabilidad Administrativa	Departamento de Desarrollo Agropecuario	Río Grande, Zacatecas	1	8	9	9 de noviembre de 2021
287	Derechos de las Personas con Enfermedades Mentales	Servicios de Salud de Zac.	Zacatecas, Zacatecas	43	21	64	10 de noviembre de 2021
288	Equidad de Género y derechos de la mujer	Servicios de Salud de Zac. Jurisdicción V Jalpa	Zacatecas, Zacatecas	30	2	32	10 de noviembre de 2021
289	ABC de los Derechos Humanos	Presidencia de Miguel Auza	Miguel Auza, Zacatecas	9	12	21	10 de noviembre de 2021
290	ABC de los Derechos Humanos	Presidencia de Juan Aldama	Juan Aldama, Zacatecas	7	15	22	10 de noviembre de 2021
291	Taller para el Diseño del Plan Municipal de Desarrollo y Elaboración de Indicadores y Evaluación	Presidencias de los 58 municipios del Estado de Zacatecas	Zacatecas, Zacatecas	68	42	110	11 de noviembre de 2021
292	Lenguaje Incluyente No sexista	Servicios de Salud de Zac. Jurisdicción V Jalpa	Zacatecas, Zacatecas	25	0	25	11 de noviembre de 2021
293	ABC de los Derechos Humanos	Presidencia de Santa María de la Paz	Santa María de la Paz, Zacatecas	4	2	6	11 de noviembre de 2021
294	ABC de los Derechos Humanos	Presidencia del Teúl de González Ortega	Teúl de González Ortega, Zacatecas	12	3	15	11 de noviembre de 2021

No.	Tema	Institución	Municipio	Mujeres	Hombres	Total	Fecha
295	ABC de los Derechos Humanos	Presidencia de Tepechitlán	Tepechitlán, Zacatecas	13	12	25	11 de noviembre de 2021
296	Políticas públicas transversales en materia de derechos humanos	Presidencia de Zacatecas	Zacatecas, Zacatecas	54	44	98	11 de noviembre de 2021
297	ABC de los Derechos Humanos	Presidencia de Apozol	Apozol, Zacatecas	5	2	7	12 de noviembre de 2021
298	ABC de los Derechos Humanos	Presidencia de Juchipila	Juchipila, Zacatecas	5	4	9	12 de noviembre de 2021
299	Derechos de la niñez y derechos laborales	Sindicato Nacional de Trabajadores a la Educación (SNTE) No. 58	Zacatecas, Zacatecas	12	20	32	16 de noviembre de 2021
300	Derechos Humanos y Seguridad Jurídica	Dirección de Seguridad Pública	Guadalupe, Zacatecas	4	15	19	16 de noviembre de 2021
301	ABC de los Derechos Humanos	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	8	7	15	16 de noviembre de 2021
302	Trata de Personas	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	8	7	15	16 de noviembre de 2021
303	Igualdad, Inclusión e Interculturalidad	Hospital Regional de Loreto, Zacatecas	Zacatecas, Zacatecas	85	29	114	17 de noviembre de 2021
304	Prevención de la Trata de Personas	Presidencia de Tepetongo	Tepetongo, Zacatecas	4	7	11	17 de noviembre de 2021
305	Ley de Responsabilidad Administrativa	Escuela Secundaria General No. 1	Río Grande, Zacatecas	10	9	19	17 de noviembre de 2021
306	Protocolo Hostigamiento y Acoso Sexual	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	8	7	15	18 de noviembre de 2021
307	Responsabilidades de los Servidores Públicos	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	8	7	15	18 de noviembre de 2021
308	ABC de los Derechos Humanos	Presidencia de Tlaltenango	Tlaltenango, Zacatecas	10	20	30	18 de noviembre de 2021
309	ABC de los Derechos Humanos	Presidencia de Atolinga	Atolinga, Zacatecas	6	3	9	18 de noviembre de 2021
310	Reglas Mandela	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	8	7	15	19 de noviembre de 2021
311	Tortura	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	8	7	15	19 de noviembre de 2021
312	ABC de los Derechos Humanos	Presidencia de Pinos	Pinos, Zacatecas	30	7	37	19 de noviembre de 2021
313	ABC de los Derechos Humanos	Presidencia de Noria de Ángeles	Noria de Ángeles, Zacatecas	28	7	35	19 de noviembre de 2021

No.	Tema	Institución	Municipio	Mujeres	Hombres	Total	Fecha
314	Derecho al uso del Internet y las Redes Sociales	Escuela Tele Secundaria General Josefa Ortiz de D.	General Francisco R. Murguía	2	2	4	19 de noviembre de 2021
315	Dilemas éticos del final de la vida: Bioética y Derechos Humanos, en el Diplomado en Bioética	Servidores públicos de diversas instituciones estatales y Consejo Estatal de Bioética	Zacatecas, Zacatecas	14	11	25	19 de noviembre de 2021
316	ABC de los Derechos Humanos	Presidencia de Valparaíso	Valparaíso, Zacatecas	11	5	16	22 de noviembre de 2021
317	Prevención de la Violencia hacia las Mujeres	Dirección de Seguridad Pública	Valparaíso, Zacatecas	22	20	42	22 de noviembre de 2021
318	Derechos Humanos y Seguridad Jurídica	Dirección de Seguridad Pública	Guadalupe, Zacatecas	0	4	4	23 de noviembre de 2021
319	ABC de los Derechos Humanos	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	3	2	5	23 de noviembre de 2021
320	Violencia de Género	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	3	2	5	23 de noviembre de 2021
321	Derechos de las Víctimas	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	3	2	5	23 de noviembre de 2021
322	Código de Conducta	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	3	2	5	24 de noviembre de 2021
323	Uso de la Fuerza	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	3	2	5	24 de noviembre de 2021
324	ABC de los Derechos Humanos	Presidencia de Luis Moya	Luis Moya, Zacatecas	24	22	46	24 de noviembre de 2021
325	Vigencia de los Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes	Sistema Estatal de Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF) y Ayuntamiento de Zacatecas	Zacatecas, Zacatecas	106	83	189	25 de noviembre de 2021
326	Prevención de la Trata de Personas	Presidencia de Monte Escobedo	Monte Escobedo, Zacatecas	14	4	18	25 de noviembre de 2021
327	Violencia contra las Mujeres y Prevención de Trata de Personas	Presidencia de Miguel Auza	Miguel Auza, Zacatecas	22	7	29	26 de noviembre de 2021
328	Violencia contra las Mujeres	Presidencia de Juan Aldama	Juan Aldama, Zacatecas	29	4	33	26 de noviembre de 2021
329	Derechos Humanos y Seguridad Jurídica	Dirección de Seguridad Pública	Guadalupe, Zacatecas	1	11	12	26 de noviembre de 2021

No.	Tema	Institución	Municipio	Mujeres	Hombres	Total	Fecha
330	Reglas Mandela	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	3	2	5	26 de noviembre de 2021
331	Tortura	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	3	2	5	26 de noviembre de 2021
332	ABC de los Derechos Humanos	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	4	7	11	29 de noviembre de 2021
333	Trata de Personas	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	4	7	11	29 de noviembre de 2021
334	ABC de los Derechos Humanos	Presidencia de Sombrerete	Sombrerete, Zacatecas	23	9	32	30 de noviembre de 2021
335	ABC de los Derechos Humanos	Presidencia de Morelos	Morelos, Zacatecas	6	9	15	1 de diciembre de 2021
336	Derechos Humanos, detención Legal y Seguridad Jurídica	Dirección de Seguridad Pública	Zacatecas, Zacatecas	15	27	42	1 de diciembre de 2021
337	Código de Conducta para personal de seguridad	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	4	8	12	1 de diciembre de 2021
338	Uso adecuado de la fuerza	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	4	8	12	1 de diciembre de 2021
339	Derechos Humanos, detención Legal y Seguridad Jurídica	Dirección de Seguridad Pública	Zacatecas, Zacatecas	13	23	36	2 de diciembre de 2021
340	ABC de los Derechos Humanos	Presidencia de Nieves	Nieves, Zacatecas	49	17	66	2 de diciembre de 2021
341	Protocolo Hostigamiento y Acoso Sexual	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	4	8	12	2 de diciembre de 2021
342	Violencia de Género	Guardia Nacional	Zacatecas, Zacatecas	4	8	12	2 de diciembre de 2021
343	Responsabilidades de los encargados de hacer cumplir la ley	Dirección de Seguridad Pública	Río Grande, Zacatecas	8	24	32	2 de diciembre de 2021
344	ABC de los Derechos Humanos	Presidencia de Moyahua	Moyahua, Zacatecas	1	7	8	3 de diciembre de 2021
345	ABC de los Derechos Humanos	Presidencia de Vetagrande	Veta Grande, Zacatecas	6	7	13	3 de diciembre de 2021
346	Inteligencia Emocional	Escuela Secundaria Técnica No. 45	Río Grande, Zacatecas	5	9	14	3 de diciembre de 2021
347	Derechos Humanos de las mujeres	Secretaría de las Mujeres y otras Instituciones de Gobierno Estatal	Zacatecas, Zacatecas	116	73	189	7 de diciembre de 2021
348	Derechos Humanos, detención Legal y Seguridad Jurídica	Dirección de Seguridad Pública	Zacatecas, Zacatecas	24	23	47	7 de diciembre de 2021

No.	Tema	Institución	Municipio	Mujeres	Hombres	Total	Fecha
349	ABC de los Derechos Humanos	Presidencia de Villanueva	Villanueva, Zacatecas	28	25	53	8 de diciembre de 2021
350	Seguridad Jurídica y derechos humanos	Presidencia de Fresnillo	Fresnillo, Zacatecas	12	36	48	9 de diciembre de 2021
351	ABC de los Derechos Humanos	Presidencia de Fresnillo	Fresnillo, Zacatecas	14	14	28	9 de diciembre de 2021
352	ABC de los Derechos Humanos	Presidencia de Calera	Calera, Zacatecas	13	18	31	9 de diciembre de 2021
353	Derechos Humanos, Detención Legal y Seguridad Jurídica	Presidencia y Seguridad Pública de Zacatecas	Zacatecas, Zacatecas	20	19	39	9 de diciembre de 2021
354	ABC de los Derechos Humanos	Presidencia de Saín Alto	Saín Alto, Zacatecas	8	13	21	10 de diciembre de 2021
355	Derechos Humanos y Medio Ambiente	Promotores de Salud Comunitaria Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)	Zacatecas, Zacatecas	7	0	7	10 de diciembre de 2021
356	Presentación del programa de Promotores	Reunión con Directora del Centros de Estudios Tecnológico Industrial y de Servicios (CETIS) No. 113	Guadalupe, Zacatecas	1	1	2	10 de diciembre de 2021
357	derechos humanos, acceso a la justicia y defensa adecuada	Instituto de la defensoría Pública	Zacatecas, Zacatecas	33	31	64	13 de diciembre de 2021
358	Cultura de la Paz y la Dignidad	Archivo Histórico Municipal	Río Grande, Zacatecas	5	5	10	13 de diciembre de 2021
359	ABC de los Derechos Humanos	Escuela Telesecundaria Jaime Torres Bodet	Jalpa, Zacatecas	2	3	5	14 de diciembre de 2021
360	ABC de los Derechos Humanos	Presidencia de Genaro Codina	Genaro Codina, Zacatecas	11	13	24	14 de diciembre de 2021
361	ABC de los Derechos Humanos	Presidencia de Ciudad Cuauhtémoc	Ciudad Cuauhtémoc, Zacatecas	11	7	18	14 de diciembre de 2021
362	Derechos Humanos y Seguridad Jurídica	Dirección de Seguridad Pública	Guadalupe, Zacatecas	1	5	6	14 de diciembre de 2021

No.	Tema	Institución	Municipio	Mujeres	Hombres	Total	Fecha
363	ABC de los Derechos Humanos	Presidencia de Momax	Momax, Zacatecas	13	8	21	15 de diciembre de 2021
364	ABC de los Derechos Humanos	Presidencia de Enrique Estrada	Enrique Estrada, Zacatecas	8	12	20	15 de diciembre de 2021
365	Derechos Humanos, detención Legal y uso de la fuerza	Dirección de Seguridad Pública	Guadalupe, Zacatecas	20	19	39	16 de diciembre de 2021
366	Personas Desaparecidas	Instituciones de Gobierno Estatal, Federal y Municipal	Zacatecas, Zacatecas	179	134	313	18 de diciembre de 2021
Total				4,102	4,305	8,407	

Fuente: Elaboración de la Unidad de Planeación y Evaluación con datos proporcionados por las áreas de Capacitación y Visitadurías.
Los datos comprenden la información del 1 de julio al 31 de diciembre de 2021.
*Algunas capacitaciones son del primer semestre del año, sin embargo, no fueron contabilizadas en la primera Gaceta, por ello se plasman ahora.

III.1.4. Capacitaciones a instituciones educativas de nivel preescolar

En el periodo del 1 de julio al 31 de diciembre de 2021, se efectuaron 5 capacitaciones en el nivel preescolar, capacitando a: 154 niñas y 167 niños. Siendo un total de 321 niñas y niños beneficiados.

Capacitaciones a Niños de Preescolar

No.	Tema	Institución	Municipio	Mujeres	Hombres	Total	Fecha
1	Desarrollo Socioemocional y Violencia Escolar	Jardín de Niños Tilloli	Zacatecas, Zacatecas	26	32	58	11 de octubre de 2021
2	Derechos de las niñas y los Niños	Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER) No. 29	Zacatecas, Zacatecas	41	38	79	08 de noviembre de 2021
3	Teatro Guiñol Valores y derechos Humanos	Centros de Desarrollo Infantil (CENDI) Emiliano Zapata	Zacatecas, Zacatecas	30	19	49	30 de noviembre de 2021
4	Teatro Guiñol Valores y derechos Humanos	Centros de Desarrollo Infantil (CENDI) Emiliano Zapata	Guadalupe, Zacatecas	45	68	113	02 de diciembre de 2021
5	Teatro Guiñol Valores y derechos Humanos	Primaria Lázaro Cárdenas	Zacatecas, Zacatecas	12	10	22	06 de diciembre de 2021
Total				154	167	321	

Fuente: Elaboración de la Unidad de Planeación y Evaluación con datos proporcionados por las áreas de Capacitación y Visitadurías.
Los datos comprenden la información del 1 de julio al 31 de diciembre de 2021.

III.1.5. Capacitaciones a instituciones educativas de nivel primaria

En el periodo del 1 de julio al 31 de diciembre de 2021, se efectuaron 9 capacitaciones en el nivel primaria, capacitando a: 188 niñas y 177 niños. Siendo un total de 365 personas beneficiadas.

Capacitaciones a Niños de Primaria

No.	Tema	Institución	Municipio	Mujeres	Hombres	Total	Fecha
1	Ambientes escolares libres de violencia	Escuela Primaria Vicente Guerrero	Atolinga, Zacatecas	8	4	12	26 de agosto de 2021
2	Ambientes escolares libres de violencia	Escuela Primaria Vicente Guerrero	Atolinga, Zacatecas	10	9	19	26 de agosto de 2021
3	Ambientes escolares libres de violencia	Escuela Primaria Vicente Guerrero	Atolinga, Zacatecas	6	5	11	26 de agosto de 2021
4	Ambientes escolares libres de violencia	Escuela Primaria Vicente Guerrero	Atolinga, Zacatecas	17	19	36	21 de septiembre de 2021
5	Ambientes escolares libres de violencia	Escuela Primaria Vicente Guerrero	Atolinga, Zacatecas	9	8	17	21 de septiembre de 2021
6	Derechos Humanos	Escuela Primaria Vicente Guerrero	Atolinga, Zacatecas	8	9	17	20 de octubre de 2021
7	Derechos Humanos	Escuela Primaria Vicente Guerrero	Atolinga, Zacatecas	6	10	16	20 de octubre de 2021
8	Básicos de derechos humanos, derechos y deberes de los estudiantes	Escuela primaria Mártires de la Revolución	La Vaquita, Pinos, Zacatecas	34	33	67	19 de noviembre de 2021
9	Teatro Guiñol Valores y derechos Humanos	Primaria García Salinas	Villanueva, Zacatecas	90	80	170	08 de diciembre de 2021
Total				**188**	**177**	**365**	

Fuente: Elaboración de la Unidad de Planeación y Evaluación con datos proporcionados por las áreas de Capacitación y Visitadurías.
Los datos comprenden la información del 1 de julio al 31 de diciembre de 2021.

III.1.6. Capacitaciones a instituciones educativas de nivel secundaria

En el periodo del 1 de julio al 31 de diciembre de 2021, se efectuaron 32 capacitaciones en el nivel secundaria, capacitando a: 984 mujeres y 939 hombres. Siendo un total de 1 mil 923 personas beneficiadas.

Capacitaciones a Jóvenes de Secundaria

No.	Tema	Institución	Municipio	Mujeres	Hombres	Total	Fecha
1	Derechos humanos y cultura de la paz	Secundaria General Juan Pablo García	Guadalupe, Zacatecas	61	29	90	7 de julio de 2021
2	Prevención del Ciberbullyin y Ciberacoso	Escuela Secundaria Francisco García Salinas	Jerez, Zacatecas	31	41	72	6 de octubre de 2021
3	Prevención del Ciberbullyin y Ciberacoso	Escuela Secundaria Francisco García Salinas	Jerez, Zacatecas	36	34	70	7 de octubre de 2021
4	Prevención del Ciberbullyin y Ciberacoso	Escuela Secundaria Francisco García Salinas	Jerez, Zacatecas	26	28	54	8 de octubre de 2021
5	Prevención del Ciberbullyin y Ciberacoso	Escuela Secundaria Francisco García Salinas	Jerez, Zacatecas	72	72	144	14 de octubre de 2021
6	Prevención del Ciberbullyin y Ciberacoso	Escuela Secundaria Francisco García Salinas	Jerez, Zacatecas	31	40	71	15 de octubre de 2021
7	ABC de los Derechos Humanos	Escuela Secundaria Lic. Benito Juárez	Atolinga, Zacatecas	7	9	16	20 de octubre de 2021
8	ABC de los Derechos Humanos	Escuela Secundaria Lic. Benito Juárez	Atolinga, Zacatecas	8	7	15	20 de octubre de 2021
9	ABC de los Derechos Humanos	Escuela Secundaria Lic. Benito Juárez	Atolinga, Zacatecas	7	7	14	20 de octubre de 2021
10	ABC de los Derechos Humanos	Escuela Secundaria Lic. Benito Juárez	Atolinga, Zacatecas	9	8	17	20 de octubre de 2021
11	ABC de los Derechos Humanos	Escuela Secundaria Lic. Benito Juárez	Atolinga, Zacatecas	9	10	19	20 de octubre de 2021
12	Uso Adecuado de las redes Sociales, así como las Tecnologías de la Información y Telecomunicación	Escuela Telesecundaria Jaime Torres Bodet	Jalpa, Zacatecas	13	28	41	4 de noviembre de 2021
13	Uso Adecuado de las redes Sociales, así como las Tecnologías de la Información y Telecomunicación	Escuela Secundaria Técnica Justo Sierra Méndez	Jalpa, Zacatecas	27	29	56	4 de noviembre de 2021

No.	Tema	Institución	Municipio	Mujeres	Hombres	Total	Fecha
14	Derecho al uso del Internet y las Redes Sociales	Escuela Secundaria General No. 1	Río Grande, Zacatecas	32	28	60	17 de noviembre de 2021
15	Derecho al uso del Internet y las Redes Sociales	Escuela Tele Secundaria General Josefa Ortiz de D.	General Francisco R. Murguía	23	22	45	19 de noviembre de 2021
16	Uso de las Tecnologías de la Información y Redes Sociales	Escuela Secundaria Técnica Justo Sierra Méndez	Jalpa, Zacatecas	17	13	30	24 de noviembre de 2021
17	Uso de las Tecnologías de la Información y Redes Sociales	Escuela Secundaria Técnica Justo Sierra Méndez	Jalpa, Zacatecas	27	35	62	25 de noviembre de 2021
18	Uso de las Tecnologías de la Información y Redes Sociales	Escuela Secundaria Técnica Justo Sierra Méndez	Jalpa, Zacatecas	32	31	63	29 de noviembre de 2021
19	Uso de las Tecnologías de la Información y Redes Sociales	Escuela Secundaria Técnica Justo Sierra Méndez	Jalpa, Zacatecas	38	27	65	30 de noviembre de 2021
20	Uso de las Tecnologías de la Información y Redes Sociales	Escuela Secundaria Técnica Justo Sierra Méndez	Jalpa, Zacatecas	19	14	33	1 de diciembre de 2021
21	Derecho al uso del Internet y las Redes Sociales	Escuela Secundaria Técnica No. 45	Río Grande, Zacatecas	19	14	33	1 de diciembre de 2021
22	Cultura de la Paz	Escuela Telesecundaria Leyes de Reforma	La Blanca, Pinos, Zacatecas	36	30	66	3 de diciembre de 2021
23	Inteligencia Emocional	Escuela Secundaria Técnica No. 45	Río Grande, Zacatecas	28	28	56	3 de diciembre de 2021
24	Uso de las Tecnologías de la Información y Redes Sociales	Escuela Secundaria Técnica Justo Sierra Méndez	Jalpa, Zacatecas	44	20	64	6 de diciembre de 2021
25	Derecho al uso del Internet y las Redes Sociales	Escuela Tele Secundaria Josefa Ortiz de Domínguez	Nieves, Zacatecas	24	26	50	6 de diciembre de 2021
26	Uso de las Tecnologías de la Información y Redes Sociales	Escuela Secundaria Técnica Justo Sierra Méndez	Jalpa, Zacatecas	29	31	60	7 de diciembre de 2021

No.	Tema	Institución	Municipio	Mujeres	Hombres	Total	Fecha
27	Derecho al uso del Internet y las Redes Sociales	Escuela Secundaria Técnica No. 45	Río Grande, Zacatecas	34	34	68	7 de diciembre de 2021
28	Básicos de derechos humanos, derechos y deberes de los estudiantes	Escuela Luis de la Rosa Oteiza	La Pachona, Pinos, Zacatecas	48	19	67	9 de diciembre de 2021
29	Cultura de la Paz	Escuela Secundaria No. 15	Pinos, Zacatecas	41	57	98	10 de diciembre de 2021
30	Cultura de la Paz	Escuela Secundaria No. 15	Pinos, Zacatecas	91	86	177	10 de diciembre de 2021
31	Inteligencia Emocional	Escuela Secundaria General No. 1	Río Grande, Zacatecas	53	56	109	10 de diciembre de 2021
32	Uso de las Tecnologías de la Información y Redes Sociales	Escuela Telesecundaria Jaime Torres Bodet	Jalpa, Zacatecas	12	26	38	14 de diciembre de 2021
Total				984	939	1,923	

Fuente: Elaboración de la Unidad de Planeación y Evaluación con datos proporcionados por las áreas de Capacitación y Visitadurías.
Los datos comprenden la información del 1 de julio al 31 de diciembre de 2021.

III.1.7. Capacitaciones a Jóvenes de Preparatoria

En el periodo del 1 de julio al 31 de diciembre de 2021, se efectuaron 17 capacitaciones en el nivel preparatoria, capacitando a: 1 mil 005 mujeres y 666 hombres. Siendo un total de 1 mil 671 personas beneficiadas.

Capacitaciones a Jóvenes de Preparatoria

No.	Tema	Institución	Municipio	Mujeres	Hombres	Total	Fecha
1	ABC de Derechos Humanos, medio ambientales y violencia escolar	Virtual Preparatoria VI Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ)	Trancoso, Zacatecas	24	18	42	9 de septiembre de 2021
2	Derechos y deberes de los estudiantes, así como proyecto de vida	Preparatoria IV de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ)	Zacatecas, Zacatecas	40	42	82	27 de septiembre de 2021
3	Inteligencia Emocional	Centro de Capacitación para el Trabajo (CECATI) No. 81	Zacatecas, Zacatecas	41	37	78	20 de octubre de 2021

No.	Tema	Institución	Municipio	Mujeres	Hombres	Total	Fecha
4	Derechos Humanos y Proyecto de Vida	Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas (COBAEZ)	Apulco, Zacatecas	18	10	28	21 de octubre de 2021
5	Prevención de Embarazo y Proyecto de Vida	Preparatoria Lázaro Cárdenas	Nochistlán, Zacatecas	7	14	21	21 de octubre de 2021
6	Violencia Escolar	Escuela Preparatoria Lázaro Cárdenas	Nochistlán, Zacatecas	7	14	21	21 de octubre de 2021
7	Sociedad Cibernética	Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas de García de la Cadena	García de la Cadena, Zacatecas	14	16	30	28 de octubre de 2021
8	ABC de los Derechos Humanos	Escuela Preparatoria Mauricio Magdaleno	Tabasco, Zacatecas	23	18	41	3 de noviembre de 2021
9	Derechos sexuales, reproductivos y proyecto de vida	Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas (COBAEZ) plantel Miguel Auza	Miguel Auza, Zacatecas	23	22	45	10 de noviembre de 2021
10	Derechos sexuales, reproductivos y proyecto de vida	Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas (COBAEZ) plantel Santa María de la Paz	Santa María de la Paz, Zacatecas	29	25	54	11 de noviembre de 2021
11	Derechos sexuales, reproductivos y proyecto de vida	Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas (COBAEZ) plantel Apozol	Apozol, Zacatecas	50	34	84	12 de noviembre de 2021
12	Uso Adecuado de redes Sociales	Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas (COBAEZ) plantel Atolinga	Atolinga, Zacatecas	21	29	50	18 de noviembre de 2021

No.	Tema	Institución	Municipio	Mujeres	Hombres	Total	Fecha
13	Promotores de Derechos Humanos	Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas (COBAEZ)	Zacatecas, Zacatecas	290	185	475	22 de noviembre de 2021
14	Derechos Humanos y Proyecto de Vida	Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas (COBAEZ) plantel Luis Moya	Luis Moya, Zacatecas	13	7	20	24 de noviembre de 2021
15	Uso Adecuado de redes Sociales	Presidencia de Monte Escobedo	Saín Alto, Zacatecas	94	53	147	25 de noviembre de 2021
16	Proyecto de Vida	Presidencia de Monte Escobedo	Zacatecas, Zacatecas	291	125	416	29 de noviembre de 2021
17	Día de los Derechos Humanos	Centros de Estudios Tecnológico Industrial y de Servicios (CETIS) No. 113	Guadalupe, Zacatecas	20	17	37	10 de diciembre de 2021
Total				1,005	666	1,671	

Fuente: Elaboración de la Unidad de Planeación y Evaluación con datos proporcionados por las áreas de Capacitación y Visitadurías.
Los datos comprenden la información del 1 de julio al 31 de diciembre de 2021.

III.1.8. Capacitaciones a Jóvenes de Profesional

En el periodo del 1 de julio al 31 de diciembre de 2021, se efectuaron 13 capacitaciones a jóvenes de profesional, capacitando a: 369 madres y 200 padres. Siendo un total de 569 personas beneficiadas.

Capacitaciones a Jóvenes de Profesional

No.	Tema	Institución	Municipio	Mujeres	Hombres	Total	Fecha
1	Derechos Humanos y Desarrollo Humano	Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ)	Zacatecas, Zacatecas	94	67	161	6 de mayo de 2021
2	ABC de los Derechos Humanos y Protocolo Hostigamiento y Acoso Sexual	Jóvenes de diversas instituciones educativas	Zacatecas, Zacatecas	5	4	9	6 de julio de 2021
3	Sigamos por la Ruta, hacia una Ley Nacional de Trabajo Social	Federación Nacional de Colegios de Trabajo Social en México en el marco del Día Nacional de las y los Trabajadores Sociales en México	Zacatecas	38	13	51	23 de agosto de 2021

No.	Tema	Institución	Municipio	Mujeres	Hombres	Total	Fecha
4	Derechos Constitucionales	Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID)	Virtual Plataforma Telmex	16	7	23	15 de septiembre de 2021
5	Riesgos en el ejercicio periodístico en México	Redes sociales y youtu.be	Zacatecas, Zacatecas	39	36	75	20 de septiembre de 2021
6	Derechos Constitucionales y laborales	Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID)	Plataforma Telmex	22	4	26	23 de septiembre de 2021
7	Investigación científica	Redes sociales y youtu.be	Zacatecas, Zacatecas	42	33	75	29 de septiembre de 2021
8	Comisiones de Derechos Humanos para la protección de las comunidades indígenas	Redes sociales y youtu.be	Zacatecas, Zacatecas	14	8	22	11 de octubre de 2021
9	Procedimiento de Queja ante la CDHEZ	Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID)	Guadalupe, Zacatecas	22	4	26	20 de octubre de 2021
10	Prevención del Maltrato Infantil y Derechos de la Niñez	Escuela Normal Manuel Ávila Camacho	Zacatecas, Zacatecas	22	6	28	26 de octubre de 2021
11	Derecho a la igualdad y no discriminación	Universidad del Centro de México	Río Grande, Zacatecas	13	7	20	4 de noviembre de 2021
12	Maltrato Infantil y Derechos de la Niñez	Escuela Normal Manuel Ávila Camacho	Zacatecas, Zacatecas	20	7	27	8 de noviembre de 2021
13	Derechos de los Pacientes	Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID)	Zacatecas, Zacatecas	22	4	26	12 de noviembre de 2021
Total				369	200	569	

Fuente: Elaboración de la Unidad de Planeación y Evaluación con datos proporcionados por las áreas de Capacitación y Visitadurías.
Los datos comprenden la información del 1 de julio al 31 de diciembre de 2021.
*Algunas capacitaciones son del primer semestre del año, sin embargo, no fueron contabilizadas en la primera Gaceta, por ello se plasman ahora.

III.1.9. Capacitaciones a Madres y Padres de Familia

En el periodo del 1 de julio al 31 de diciembre de 2021, se efectuaron 19 capacitaciones a madres y padres de familia, capacitando a: 506 madres y 101 padres. Siendo un total de 607 personas beneficiadas.

Capacitaciones a Madres y Padres de Familia

No.	Tema	Institución	Municipio	Mujeres	Hombres	Total	Fecha
1	Derechos y Deberes de los padres en la Escuela	Secundaria Técnica 73 Matías Ramos	Guadalupe, Zacatecas	42	4	46	2 de julio de 2021
2	Inteligencia Emocional	Grupo de Formación Independiente (GFI)	Río Grande, Zacatecas	20	20	40	9 de agosto de 2021
3	Derechos Humanos y COVID-19	Grupo de Formación Independiente (GFI)	Río Grande, Zacatecas	13	7	20	24 de agosto de 2021
4	Derechos Humanos y COVID-19	Grupo de Formación Independiente (GFI)	Río Grande, Zacatecas	17	4	21	24 de agosto de 2021
5	Respeto y Valores	Grupo de Formación Independiente (GFI)	Río Grande, Zacatecas	12	8	20	10 de septiembre de 2021
6	Aprendizaje Socioemocional	Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER)	Zacatecas, Zacatecas	42	12	54	13 de octubre de 2021
7	Básico de derechos humanos y Violencia familiar	Jardín de Niños Joaquín Fernández de Lizardi	Tolosa, Pinos, Zacatecas	19	2	21	20 de octubre de 2021
8	Prevención del Ciberbullyin y Ciberacoso	Escuela Secundaria Francisco García Salinas	Jerez, Zacatecas	60	13	73	21 de octubre de 2021
9	Básico de derechos humanos y Violencia familiar	Jardín de Niños Leobardo C. Ruiz	Los Arquitos, Pinos, Zacatecas.	21	1	22	21 de octubre de 2021
10	Prevención del Ciberbullyin y Ciberacoso	Escuela Secundaria Francisco García Salinas	Jerez, Zacatecas	16	5	21	22 de octubre de 2021

No.	Tema	Institución	Municipio	Mujeres	Hombres	Total	Fecha
11	Básico de derechos humanos y Violencia familiar	Jardín de Niños José Ma. Pinos Suárez	La Colorada, Pinos, Zacatecas	20	1	21	26 de octubre de 2021
12	Básico de derechos humanos y Violencia familiar	Jardín de Niños Eleazaro Hernández Granada	La Estrella, Pinos, Zacatecas	35	3	38	26 de octubre de 2021
13	Deberes de los Padres en el Proceso Educativo	Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER) No. 29	Zacatecas, Zacatecas	42	12	54	11 de noviembre de 2021
14	Básico de derechos humanos y violencia familiar	Escuela primaria Mártires de la Revolución	La Vaquita, Pinos, Zacatecas	48	2	50	17 de noviembre de 2021
15	Básico de derechos humanos y deberes de los padres en la escuela	Escuela Telesecundaria Leyes de Reforma	La Blanca, Pinos, Zacatecas	46	1	47	25 de noviembre de 2021
16	Deberes de los Padres en el Proceso Educativo	Escuela Primaria Benito Juárez	San Cayetano, Benito Juárez, Zacatecas	7	2	9	29 de noviembre de 2021
17	Básico de derechos humanos y deberes de los padres en la escuela	Jardín de niños Suave Patria	Estación Espíritu Santo, Pinos, Zacatecas	26	0	26	30 de noviembre de 2021
18	Deberes de los Padres en el Proceso Educativo	Escuela Primaria Lázaro Cárdenas	Zacatecas, Zacatecas	9	0	9	1 de diciembre de 2021
19	Relaciones Humanas	Jardín de Niños Tilloli	Zacatecas, Zacatecas	11	4	15	16 de diciembre de 2021
Total				506	101	607	

Fuente: Elaboración de la Unidad de Planeación y Evaluación con datos proporcionados por las áreas de Capacitación y Visitadurías.
Los datos comprenden la información del 1 de julio al 31 de diciembre de 2021.

III.1.10. Capacitaciones a Grupos Vulnerables

En el periodo del 1 de julio al 31 de diciembre de 2021, se efectuaron 17 capacitaciones a grupos de la sociedad civil, capacitando a: 288 mujeres y 392 hombres. Siendo un total de 680 personas beneficiadas.

Capacitaciones a Grupos Vulnerables

No.	Tema	Institución	Municipio	Mujeres	Hombres	Total	Fecha
1	Respeto y Valores	Centro de Rehabilitación Transformando Vidas (Álamos)	Río Grande, Zacatecas		21	21	5 de agosto de 2021
2	El ABC de los Derechos Humanos	Casa Hogar Santa Elena de la Pres	Río Grande, Zacatecas	5	3	8	10 de agosto de 2021
3	Inteligencia Emocional	Casa Hogar Santa Elena A.C.	Río Grande, Zacatecas	5	5	10	11 de agosto de 2021
4	Inteligencia Emocional	Centro de Rehabilitación Transformando Vidas (Álamos)	Río Grande, Zacatecas		23	23	12 de agosto de 2021
5	Respeto y Valores (1ra. Sesión)	Centro de Rehabilitación Transformando Vidas ARRSA	Río Grande, Zacatecas	4	4	8	16 de agosto de 2021
6	Respeto y Valores (2da. Sesión)	Centro de Rehabilitación Transformando Vidas ARRSA	Río Grande, Zacatecas	4	5	9	23 de agosto de 2021
7	Inteligencia Emocional	Centro de Rehabilitación Transformando Vidas ARRSA	Río Grande, Zacatecas	5	5	10	2 de septiembre de 2021
8	Respeto y Valores	Centro de Rehabilitación Transformando Vidas ARRSA	Río Grande, Zacatecas	0	19	19	8 de septiembre de 2021
9	Inteligencia Emocional	Centro de Rehabilitación Transformando Vidas ARRSA	Río Grande, Zacatecas	0	19	19	14 de septiembre de 2021
10	Respeto y Valores (1ra. Sesión)	Centro de Rehabilitación Transformando Vidas (Álamos)	Río Grande, Zacatecas	0	17	17	17 de septiembre de 2021
11	Respeto y Valores (2da. Sesión)	Centro de Rehabilitación Transformando Vidas (Álamos)	Río Grande, Zacatecas	0	17	17	23 de septiembre de 2021
12	Derecho a la igualdad y no discriminación	Centro de Rehabilitación Transformando Vidas (Álamos)	Río Grande, Zacatecas	0	19	19	27 de septiembre de 2021
13	Desaparición	Colectivos de personas desaparecidas, principalmente	Zacatecas, Zacatecas	228	185	413	2 de octubre de 2021

No.	Tema	Institución	Municipio	Mujeres	Hombres	Total	Fecha
14	Respeto y Valores	Centro de Rehabilitación Transformando Vidas (Álamos)	Río Grande, Zacatecas	0	23	23	6 de octubre de 2021
15	Cultura de la Paz	Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (SMDIF)	Nochistlán, Zacatecas	12	3	15	21 de octubre de 2021
16	El ABC de los Derechos Humanos	Grupo Volver a Nacer de AA	Río Grande, Zacatecas		7	7	11 de noviembre de 2021
17	Derechos de las personas con Discapacidad	Presidencia de Juchipila	Juchipila, Zacatecas	25	17	42	3 de diciembre de 2021
Total				288	392	680	

Fuente: Elaboración de la Unidad de Planeación y Evaluación con datos proporcionados por las áreas de Capacitación y Visitadurías.
Los datos comprenden la información del 1 de julio al 31 de diciembre de 2021.

III.1.11. Capacitaciones a Grupos de la Sociedad Civil

En el periodo del 1 de julio al 31 de diciembre de 2021, se efectuaron 7 capacitaciones a grupos de la sociedad civil, capacitando a: 67 mujeres y 106 hombres. Siendo un total de 173 personas beneficiadas.

Capacitaciones a Grupos de la Sociedad Civil

No.	Tema	Institución	Municipio	Mujeres	Hombres	Total	Fecha
1	Derechos de las Mujeres en los medios de comunicación	Periodistas en Zacatecas	Zacatecas, Zacatecas	9	3	12	22 de febrero de 2021
2	Derechos Humanos, Covid 19 y Prevención de Violencia	Sociedad Civil	Zacatecas, Zacatecas	10	25	35	12 de abril de 2021
3	Inteligencia Emocional	Reunión de Jóvenes Emprendedores	Río Grande	11	15	26	12 de julio de 2021
4	Diversidad sexual	Organizaciones de la Sociedad Civil	Zacatecas, Zacatecas	9	7	16	6 de octubre de 2021
5	Derechos Humanos y Medio Ambiente	Club de Caza Venados del Río	Río Grande, Zacatecas	0	28	28	15 de octubre de 2021
6	Derecho a la igualdad y no discriminación	Grupo de Formación Independiente (GFI)	Río Grande, Zacatecas	16	25	41	25 de octubre de 2021

No.	Tema	Institución	Municipio	Mujeres	Hombres	Total	Fecha
7	Diálogos de Empresarios con Autoridades: Hacia la construcción y Cumplimiento de los Derechos de las MIPYMES. Desigualdad Fiscal y abuso a las MIPYMES (Investigación y Testimonios)	Personas pertenecientes a pequeñas y medianas empresas	Zacatecas, Zacatecas	12	3	15	10 de noviembre de 2021
Total				67	106	173	

Fuente: Elaboración de la Unidad de Planeación y Evaluación con datos proporcionados por las áreas de Capacitación y Visitadurías.
Los datos comprenden la información del 1 de julio al 31 de diciembre de 2021.
*Algunas capacitaciones son del primer semestre del año, sin embargo, no fueron contabilizadas en la primera Gaceta, por ello se plasman ahora.

III.2. Difusión de los derechos humanos en medios de comunicación

La difusión es un elemento fundamental para la creación de una cultura universal de derechos humanos, por ello la Comisión ha adoptado como una de sus estrategias prioritarias la difusión masiva de los derechos humanos y libertades fundamentales con el objetivo de que la población desarrolle las competencias y aptitudes necesarias para promover, defender y aplicar los derechos humanos en la vida cotidiana.
Asimismo, la difusión masiva de los programas, servicios y actividades que se realizan ordinariamente en el Organismo Defensor de los Derechos Humanos, relativos a la promoción, protección, defensa, observancia, estudio y divulgación de los derechos humanos, en los distintos medios de comunicación televisivos, radiofónicos, impresos y digitales, a través del informativo "Tus Derechos", boletines de prensa, infografías, archivos gifs, cápsulas de radio y video, así como documentales.

Por lo anterior durante el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 se desarrolló por parte de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas una intensa labor de difusión a través de las siguientes actividades:

III.2.1. Infografías, Videografías y GIF

En el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021, se elaboraron y difundieron 652 Infografías, Videografías y GIF.

Derecho Humano	Infografías/Videografías/ GIF
Derecho a la Cultura	321
Derecho a la Salud	101
Derecho de Acceso a la Información	33
Derechos de las Personas con Discapacidad	32
Derecho a la Libertad y Seguridad	22
Derecho al medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar	15
Derecho de los Migrantes	14
Derecho de las Personas Adultas Mayores	11
Derecho a la Salud Mental	9
Derechos Humanos	8
Derecho a la Educación	7
Derecho a la Igualdad y No Discriminación	7
Derecho a la Libertad de Expresión	7
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes	7
Derecho de las Niñas	7
Derecho de las Mujeres a la Salud	6
Derecho a la Lactancia Materna	4
Derecho a la Identidad	3
Derecho a la información	3
Derecho a la protección de la salud y seguridad integral	3
Derecho de Acceso a Internet	3
Derechos a la salud de Niñas, Niños y Adolescentes	3
Derecho de las Personas LGBTIQ+	3
Derecho de las Mujeres	2
Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia	2
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes a una vida libre de v	2
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes	2
Derecho a la Alimentación	1
Derecho a la Asistencia Humanitaria	1
Derecho a la participación	1
Derecho a la prioridad	1
Derecho a la Salud de Niñas, Niños y Adolescentes	1
Derecho a la Salud Sexual y Reproductiva	1
Derecho a la Seguridad y Protección Personal	1
Derecho a la vida	1
Derecho a seguridad jurídica y debido proceso	1

Derecho Humano	Infografías/Videografías/ GIF
Derecho al agua	1
Derecho al Trabajo	1
Derecho de las Mujeres y las Niñas	1
Derecho de las Personas con Discapacidad	1
Derechos de las Personas Víctimas de Desaparición	1
Derechos de los Pueblos Indígenas	1
TOTAL	652

Fuente: Información de la Dirección de Comunicación Social de la CDHEZ.
Los datos comprenden la información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021.

III.2.2. Derechos humanos difundidos en los contenidos de las publicaciones de las redes sociales institucionales

En el periodo a informar se difundieron 819 derechos humanos en los contenidos de las publicaciones de las redes sociales institucionales.

Derechos Humanos difundidos en las publicaciones Institucionales

Derecho Humano	Número
Derecho a la cultura	304
Derechos humanos	187
Derecho a la Salud	137
Derecho a la Igualdad y a la no discriminación	19
Derechos de las niñas, niños y adolescentes	16
Derechos Humanos en materia penal	15
Derechos de los migrantes	14
Derecho a la seguridad personal	12
Derechos de los adultos mayores	11
Contra la Trata de Personas	11
Derechos de las personas con discapacidad	9
Derecho a la educación	8
Derecho de las mujeres a una vida libre de violencia	8
Derecho a la información	6
Derecho a la libertad y seguridad	6
Derecho a la seguridad e integridad personal	6
Derechos de las mujeres a una vida libre de violencia	6
Derecho a la lactancia	5

Derecho Humano	Número
Derecho de las personas con discapacidad	5
Derecho a la vida	4
Derechos de las mujeres	4
Derechos de las víctimas	4
Derecho a la identidad	3
Derecho a la intimidad	3
Derecho a la alimentación	2
Derecho a la intimidad y a la privacidad	2
Derecho al acceso a la información	2
Derecho libertad sexual	2
Derecho a la Igualdad entre el hombre y mujer	1
Derecho a la libertad	1
Derecho a la vivienda	1
Derecho a medio ambiente sano	1
Derecho al acceso a la justicia	1
Derechos a libertad de expresión	1
Derechos de las personas privadas de la libertad	1
Derechos de los pueblos indígenas	1
TOTAL	819

Nota 1: Esta tabla representa los derechos humanos difundidos en los contenidos de las publicaciones de las redes sociales institucionales, mismas en las que se está considerados materiales como infografías, GIF y videos.
Fuente: Información de la Dirección de Comunicación Social de la CDHEZ.
Los datos comprenden la información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021.

III.2.3. Cápsulas de radio

En el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 se realizaron 26 Cápsulas de radio difundiendo los derechos humanos.

Cápsulas de radio

No.	Fecha de emisión	Tema	Transmitido
1	27 de abril de 2021	Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes	Lobos FM / 95.5 FM
2	4 de mayo de 2021	Derechos de las mujeres y derechos de las Niñas	Lobos FM / 95.5 FM
3	11 de mayo de 2021	Violencia Obstétrica	Lobos FM / 95.5 FM
4	18 de mayo de 2021	Violencia Obstétrica	Lobos FM / 95.5 FM

No.	Fecha de emisión	Tema	Transmitido
5	28 de mayo de 2021	Derecho a la información, Derecho a la educación, Derecho a la cultura	Lobos FM / 95.5 FM
6	1 de junio de 2021	Derecho a la Educación	Lobos FM / 95.5 FM
7	8 de junio de 2021	Día mundial contra le trabajo infantil	Lobos FM / 95.5 FM
8	15 de junio de 2021	Día mundial del donante de sangre	Lobos FM / 95.5 FM
9	22 de junio de 2021	"Día mundial de los Refugiados"	Lobos FM / 95.5 FM
10	29 de junio de 2021	"Día del Orgullo LGBT+"	Lobos FM / 95.5 FM
11	6 de julio de 2021	Violencia digital	Lobos FM / 95.5 FM
12	15 de julio de 2021	Día mundial de las habilidades de los jóvenes	Lobos FM / 95.5 FM
13	3 de agosto de 2021	Trata de Personas	Lobos FM / 95.5 FM
14	10 de agosto de 2021	Día internacional de los pueblos indígenas y sus derechos	Lobos FM / 95.5 FM
15	19 de agosto de 2021	Día mundial de la asistencia humanitaria	Lobos FM / 95.5 FM
16	30 de agosto de 2021	Día Internacional de las víctimas de desaparición forzada	Lobos FM / 95.5 FM
17	31 de agosto de 2021	Día internacional de la mujer indígena y sus derechos	Lobos FM / 95.5 FM
18	9 de septiembre de 2021	Día del migrante zacatecano y sus derechos	Lobos FM / 95.5 FM
19	14 de septiembre de 2021	Día de la independencia	Lobos FM / 95.5 FM
20	23 de septiembre de 2021	Día internacional de la lengua de señas	Lobos FM / 95.5 FM
21	28 de septiembre de 2021	Día Internacional del Derecho de Acceso Universal a la Información	Lobos FM / 95.5 FM
22	20 de octubre de 2021	Día mundial de lucha contra el cáncer de mama y los derechos de la mujer	Lobos FM / 95.5 FM
23	26 de octubre de 2021	Día de las naciones unidas	Lobos FM / 95.5 FM
24	9 de noviembre de 2021	Día mundial de la Adopción y los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes	Lobos FM / 95.5 FM
25	1 de diciembre de 2021	Día Mundial de Acción contra el VIH y SIDA	Lobos FM / 95.5 FM
26	10 de diciembre de 2021	Día Internacional de los Derechos Humanos	Lobos FM / 95.5 FM

Fuente: Información de la Dirección de Comunicación Social de la CDHEZ.
Los datos comprenden la información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021.

III.2.4. Cápsulas de Video

En el periodo que se informa se efectuaron 142 videos y documentales sobre los derechos humanos y el quehacer institucional.

Cápsulas de video

Fecha	Video	Tema
28 de enero de 2021	Video del Informe Anual de Actividades de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas	Eje del Informe Anual sobre la Protección y Defensa
29 de enero de 2021	Video del Informe Anual de Actividades de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas	Eje del Informe Anual sobre la Promoción y Difusión
30 de enero de 2021	Video del Informe Anual de Actividades de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas	Eje del Informe Anual sobre la Observancia de los Derechos Humanos
31 de enero de 2021	Video del Informe Anual de Actividades de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas	Eje del Informe Anual sobre la Desarrollo Institucional.
1 de febrero de 2021	Video del Informe Anual de Actividades de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas	Cápsula informativa sobre el evento de Informe de Actividades 2020 de la CDHEZ
27 de febrero de 2021	Colaboración de la Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la CDHEZ en el Noticiero Sistema Informativo del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión	Derecho a la participación ciudadana
3 de marzo de 2021	Colaboración de la Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la CDHEZ en el Noticiero Sistema Informativo del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión	Derecho a la Seguridad e Integridad Personal
8 de marzo de 2021	Colaboración de la Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la CDHEZ en el Noticiero Sistema Informativo del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión	Derechos de las mujeres, 8M.
15 de marzo de 2021	Colaboración de la Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la CDHEZ en el Noticiero Sistema Informativo del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión	Derecho a la Educación y la Ley de Educación Superior
29 de marzo de 2021	Colaboración de la Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la CDHEZ en el Noticiero Sistema Informativo del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión	Presentación del libro "Situación de adultos mayores en el estado de Zacatecas" por la CDHEZ
30 de marzo de 2021	Informativo de la CDHEZ.	Actividades de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas
31 de marzo de 2021	Informativo de la CDHEZ.	Actividades de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas

Fecha	Video	Tema
2 de abril de 2021	Informativo de la CDHEZ.	Actividades de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas
5 de abril de 2021	Video acerca de la concientización de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes	Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes
8 de abril de 2021	Video acerda del Derecho a la Salud	Derecho a la Salud
12 de abril de 2021	Video Derechos Humanos	Derecho a la integridad y seguridad personal.
13 de abril de 2021	Video informativo de derechos humanos	Derecho a la protección de datos personales.
14 de abril de 2021	Video informativo de derechos humanos	Derecho a la Alimentación.
15 de abril de 2021	Video informativo de derechos humanos	Derecho a la igualdad y no discriminación.
15 de abril de 2021	Video acerca de la concientización de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes	Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes
16 de abril de 2021	Video informativo de derechos humanos	Derecho de Acceso a la Justicia
19 de abril de 2021	Video informativo de derechos humanos	Derecho a la legalidad y seguridad juríadica.
19 de abril de 2021	Video acerca de la importancia del desarrollo sustentable	Derecho al medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar
20 de abril de 2021	Video informativo de derechos humanos	Derecho a la libertad
20 de abril de 2021	Video acerca de la importancia del desarrollo sustentable	Derecho al medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar
21 de abril de 2021	Video informativo de derechos humanos	Derecho a la Nacionalidad
21 de abril de 2021	Video acerca de la concientización de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes	Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes
21 de abril de 2021	Video acerca de la importancia del desarrollo sustentable	Derecho al medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar
22 de abril de 2021	Video informativo acerca del día internacional de la tierra	Derecho al medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar
22 de abril de 2021	Video informativo de derechos humanos	Derecho a la reparación integral
22 de abril de 2021	Video acerca de la importancia del desarrollo sustentable.	Derecho al medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar

Fecha	Video	Tema
23 de abril de 2021	Video informativo de derechos humanos	Derecho al trato digno
23 de abril de 2021	Video acerca de la importancia del desarrollo sustentable	Derecho al medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar
26 de abril de 2021	Video informativo de derechos humanos.	Derecho a la igualdad entre mujeres y hombres
27 de abril de 2021	Video informativo de derechos humanos	Derecho a la libertad de expresión
28 de abril de 2021	Video informativo de derechos humanos	Derecho a la libertad de pensamiento
28 de abril de 2021	Video informativo acerca de derechos humanos de las NNAs.	Derecho a la información
30 de abril de 2021	Video informativo de derechos humanos	Derecho a la alimentación
30 de abril de 2021	Video de teatro guiñol, basado en derechos humanos	Video-Cuento "La Piedra del Bosque".
3 de mayo de 2021	Video informativo de derechos humanos	Derecho a la igualdad entre hombre y mujer
3 de mayo de 2021	Video informativo acerca de la lactancia materna	Lactancia Materna un Derecho Humano
4 de mayo de 2021	Video informativo acerca de la lactancia materna	Lactancia Materna un Derecho Humano
4 de mayo de 2021	Video informativo de derechos humanos.	Derecho a la libertad de expresión.
5 de mayo de 2021	Video informativo de derechos humanos.	Derecho al trato digno.
5 de mayo de 2021	Video informativo acerca de la lactancia materna	Lactancia Materna un Derecho Humano
6 de mayo de 2021	Video informativo de derechos humanos.	Derecho de Acceso a la Justicia
6 de mayo de 2021	Video informativo acerca de la lactancia materna	Lactancia Materna un Derecho Humano
7 de mayo de 2021	Video informativo acerca de la lactancia materna	Lactancia Materna un Derecho Humano
10 de mayo de 2021	Video informativo acerca de la violencia obstétrica.	Derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, en relación con el más alto disfrute de la salud
11 de mayo de 2021	Video informativo acerca de la violencia obstétrica.	Derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, en relación con el más alto disfrute de la salud
12 de mayo de 2021	Video informativo acerca de la violencia obstétrica.	Derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, en relación con el más alto disfrute de la salud

Fecha	Video	Tema
13 de mayo de 2021	Video informativo acerca de la violencia obstétrica.	Derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, en relación con el más alto disfrute de la salud
14 de mayo de 2021	Video informativo acerca de la violencia obstétrica.	Derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, en relación con el más alto disfrute de la salud
17 de mayo de 2021	Video informativo acerca de la lactancia materna	Lactancia Materna un Derecho Humano
17 de mayo de 2021	Video informativo acerca de los derechos de los estudiantes	Derecho de los Estudiantes y el Derecho a la Educación
19 de mayo de 2021	Video informativo acerca de los derechos de los estudiantes	Derecho de los Estudiantes y el Derecho a la Educación
19 de mayo de 2021	Video informativo acerca de la lactancia materna	Lactancia Materna un Derecho Humano
19 de mayo de 2021	Video informativo acerca de los derechos de los estudiantes	Derecho de los Estudiantes y el Derecho a la Educación
20 de mayo de 2021	Video informativo acerca de los derechos de los estudiantes	Derecho de los Estudiantes y el Derecho a la Educación
21 de mayo de 2021	Video informativo acerca de la lactancia materna	Lactancia Materna un Derecho Humano
21 de mayo de 2021	Video informativo acerca de los derechos de los estudiantes	Derecho de los Estudiantes y el Derecho a la Educación
24 de mayo de 2021	Videografía sobre recomendaciones para una vida saludable	Derecho a la salud y Derecho a la alimentación
25 de mayo de 2021	Videografía sobre recomendaciones para una vida saludable	Derecho a la salud y Derecho a la alimentación
26 de mayo de 2021	Videografía sobre recomendaciones para una vida saludable	Derecho a la salud y Derecho a la alimentación
27 de mayo de 2021	Videografía sobre recomendaciones para una vida saludable	Derecho a la salud y Derecho a la alimentación
28 de mayo de 2021	Videografía sobre recomendaciones para una vida saludable	Derecho a la salud y Derecho a la alimentación
1 de junio de 2021	Video informativo acerca del cuidado del medio ambiente	Derecho al medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar
2 de junio de 2021	Video informativo de derechos humanos	Derecho al trato digno
2 de junio de 2021	Video informativo acerca del cuidado del medio ambiente	Derecho al medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar
4 de junio de 2021	Video informativo de derechos humanos	Derecho a la salud

Fecha	Video	Tema
5 de junio de 2021	Colaboración de la Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la CDHEZ en el Noticiero Sistema Informativo del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión	Derecho al voto
7 de junio de 2021	Video informativo de derechos humanos	Derecho a la identidad
7 de junio de 2021	Video informativo acerca del cuidado del medio ambiente	Derecho al medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar
8 de junio de 2021	Video informativo acerca del cuidado del medio ambiente	Derecho al medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar
9 de junio de 2021	Video informativo de derechos humanos	Derecho a la igualdad y no discriminación
9 de junio de 2021	Video informativo acerca del cuidado del medio ambiente	Derecho al medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar
10 de junio de 2021	Video informativo acerca del cuidado del medio ambiente	Derecho al medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar
11 de junio de 2021	Video informativo acerca del cuidado del medio ambiente	Derecho al medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar
12 de junio de 2021	Colaboración de la Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la CDHEZ en el Noticiero Sistema Informativo del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión	Derecho a la libertad de expresión
16 de junio de 2021	Video de Clausura de cursos de capacitación	Clausura del Curso de Capacitación denominado “Ambientes Escolares Libres de Violencia”
21 de junio de 2021	Colaboración de la Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la CDHEZ en el Noticiero Sistema Informativo del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión	Derecho a la Propiedad y la Ley Nacional de Extinción de Dominio
29 de junio de 2021	Video de teatro guiñol para el fomento de los derechos humanos.	Teatro Guiñol "La Mesa Directiva".
5 de julio de 2021	Video de teatro guiñol para el fomento de los derechos humanos.	Teatro Guiñol "Aula Alegría", teatro guiñol de concientización de DDHH.
5 de julio de 2021	Colaboración de la Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la CDHEZ en el Noticiero Sistema Informativo del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión	Quejas por falta de medicamento oncológico en el país
6 de julio de 2021	Video informativo acerca sobre Trata de Personas	¿Qué es la Trata de Personas y cómo prevenirla?
9 de julio de 2021	Video informativo acerca sobre Trata de Personas	¿Qué es la Trata de Personas y cómo prevenirla?

Fecha	Video	Tema
9 de julio de 2021	Colaboración de la Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la CDHEZ en el Noticiero Sistema Informativo del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión	Seguridad y Derechos Humanos
16 de julio de 2021	Colaboración de la Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la CDHEZ en el Noticiero Sistema Informativo del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión	Derecho a la Salud y la crisis en el sector médico
19 de julio de 2021	Video acerca de recomendaciones para unas vacaciones seguras	Prevención de Accidentes
20 de julio de 2021	Video acerca de recomendaciones para unas vacaciones seguras	Prevención de Accidentes
21 de julio de 2021	Video acerca de recomendaciones para unas vacaciones seguras	Prevención de Accidentes
22 de julio de 2021	Video acerca de recomendaciones para unas vacaciones seguras	Prevención de Accidentes
23 de julio de 2021	Video acerca de recomendaciones para unas vacaciones seguras	Prevención de Accidentes
26 de julio de 2021	Video acerca de datos acerca de la violencia digital	Acciones de Prevención contra la Violencia Digital
27 de julio de 2021	Video acerca de datos acerca de la violencia digital	Acciones de Prevención contra la Violencia Digital
28 de julio de 2021	Video acerca de datos acerca de la violencia digital	Acciones de Prevención contra la Violencia Digital
29 de julio de 2021	Video acerca de datos acerca de la violencia digital	Acciones de Prevención contra la Violencia Digital
30 de julio de 2021	Video acerca de datos acerca de la violencia digital	Acciones de Prevención contra la Violencia Digital
2 de agosto de 2021	Colaboración de la Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la CDHEZ en el Noticiero Sistema Informativo del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión	Decreto para liberar personas privadas de su libertad
5 de agosto de 2021	Video informativo acerca de la lactancia materna	Lactancia Materna un Derecho Humano
6 de agosto de 2021	Video informativo acerca de la lactancia materna	Lactancia Materna un Derecho Humano
7 de agosto de 2021	Video informativo acerca de la lactancia materna	Lactancia Materna un Derecho Humano
7 de agosto de 2021	Colaboración de la Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la CDHEZ en el Noticiero Sistema Informativo del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión	Resultado del CONEVAL en la medición de la pobreza.
9 de agosto de 2021	Videografía acerca de los derechos de los pueblos indígenas	Derechos de los Pueblos Originarios o Pueblos Indígenas
10 de agosto de 2021	Videografía acerca de los derechos de los pueblos indígenas	Derechos de los Pueblos Originarios o Pueblos Indígenas

Fecha	Video	Tema
11 de agosto de 2021	Videografía acerca de los derechos de los pueblos indígenas	Derechos de los Pueblos Originarios o Pueblos Indígenas
12 de agosto de 2021	Videografía acerca de los derechos de los pueblos indígenas	Derechos de los Pueblos Originarios o Pueblos Indígenas
12 de agosto de 2021	Videografía informativa acerca de recomendaciones para después la vacuna contra COVID19.	Derecho a la Salud
13 de agosto de 2021	Videografía acerca de los derechos de los pueblos indígenas y datos generales.	Derecho a la identidad
13 de agosto de 2021	Videografía informativa acerca de recomendaciones para después la vacuna contra COVID19.	Derecho a la Salud
14 de agosto de 2021	Videografía acerca de los derechos de los pueblos indígenas	Derechos de los Pueblos Originarios o Pueblos Indígenas
14 de agosto de 2021	Videografía informativa acerca de recomendaciones para después la vacuna contra COVID19.	Derecho a la Salud
14 de agosto de 2021	Colaboración de la Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la CDHEZ en el Noticiero Sistema Informativo del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión	Mecanismos de protección a periodistas y defensores de derechos humanos
16 de agosto de 2021	Videografía informativa acerca de recomendaciones para después la vacuna contra COVID19.	Derecho a la Salud
17 de agosto de 2021	Videografía informativa acerca de recomendaciones para después la vacuna contra COVID19.	Derecho a la Salud
23 de agosto de 2021	Colaboración de la Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la CDHEZ en el Noticiero Sistema Informativo del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión	Medidas de prevensión santiria y regreso a clases
30 de agosto de 2021	Colaboración de la Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la CDHEZ en el Noticiero Sistema Informativo del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión	Regreso a clases presenciales y el derecho a la educación
4 de septiembre de 2021	Colaboración de la Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la CDHEZ en el Noticiero Sistema Informativo del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión	Caravanas migrantes
11 de septiembre de 2021	Colaboración de la Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la CDHEZ en el Noticiero Sistema Informativo del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión	Impacto de la pandemia de COVID-19 en las mujeres.
20 de septiembre de 2021	Colaboración de la Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la CDHEZ en el Noticiero Sistema Informativo del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión	Riesgos del ejercicio periodístico en México

Fecha	Video	Tema
28 de septiembre de 2021	Colaboración de la Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la CDHEZ en el Noticiero Sistema Informativo del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión	Investigaciones que realizan a integrantes del CONACyT
4 de octubre de 2021	Video informativo del mural "Ausencia"	Video informativo del mural denominado "Ausencia", un homenaje a las personas desaparecidas
14 de octubre de 2021	Video Aniversario luctuoso de Tenamaxtle	Video sobre el evento conmemorativo realizado por la CDHEZ en el aniversario luctuoso de Tenamaxtle
18 de octubre de 2021	Colaboración de la Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la CDHEZ en el Noticiero Sistema Informativo del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión	Planes estatales y municipales de desarrollo con perspectiva de Derechos Humanos
1 de noviembre de 2021	Cápsula sobre el Altar de Muertos de la CDHEZ	Video informativo acerca del altar de muertos, dirigido por la Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la CDHEZ.
22 de noviembre de 2021	Video presentación del nuevo Logotipo de la CDHEZ	Video informativo presentando el nuevo logotipo de la CDHEZ
26 de noviembre de 2021	Cápsula de presentación de los Murales de la CDHEZ	Video informativo sobre la inauguración de los murales plasmados al interior del edificio de la CDHEZ y la Inauguración de la sala Hermanas Meribal.
6 de diciembre de 2021	Cápsula sobre de los Derechos Humanos	Qué son los Derechos Humanos
6 de diciembre de 2021	Cápsula sobre de los Derechos Humanos	Derecho de Acceso a la Justicia
7 de diciembre de 2021	Cápsula sobre de los Derechos Humanos	Derechos de las Personas con Discapacidad
8 de diciembre de 2021	Cápsula sobre de los Derechos Humanos	Derecho a la igualdad y no discriminación
8 de diciembre de 2021	Cápsula sobre de los Derechos Humanos	Derechos Humanos
9 de diciembre de 2021	Cápsula sobre de los Derechos Humanos	Derechos Humanos
17 de diciembre de 2021	Video Premio Estatal de Derechos Humanos	Video sobre los Colectivos galardonados durante la entrega del Premio Estatal de Derechos Humanos Tenamaxtle 2021

Fecha	Video	Tema
28 de diciembre de 2021	Videografía, recomendaciones para Viaje seguro #1	Derecho al libre tránsito
28 de diciembre de 2021	Videografía, recomendaciones para Viaje seguro #2	Derecho al libre tránsito
29 de diciembre de 2021	Videografía, recomendaciones para Viaje seguro #3	Derecho al libre tránsito
29 de diciembre de 2021	Videografía, recomendaciones para Viaje seguro #4	Derecho al libre tránsito
30 de diciembre de 2021	Videografía, recomendaciones para Viaje seguro #1	Derecho al libre tránsito
31 de diciembre de 2021	Videografía, recomendaciones para Viaje seguro #2	Derecho al libre tránsito
1 de enero de 2022	Videografía, recomendaciones para Viaje seguro #3	Derecho al libre tránsito
2 de enero de 2022	Videografía, recomendaciones para Viaje seguro #4	Derecho al libre tránsito

Fuente: Información de la Dirección de Comunicación Social de la CDHEZ.
Los datos comprenden la información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021.

III.2.5. Campañas de difusión

En el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021, se elaboraron y difundieron 66 Campañas de difusión en materia de derechos humanos.

Campañas de difusión

Mes	Número de campaña	Tema
Enero	Campaña 01	¿Qué es una Pandemia?
	Campaña 02	Depresión y como detectarla
	Campaña 03	Medidas Preventivas, Evita Contagio
	Campaña 04	Invitación al 5to. Informe 2020
	Campaña 05	Informe de Actividades 2020 de la Dra. Ma. de la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la CDHEZ
Febrero	Campaña 06	Modos de contagio COVID-19
	Campaña 07	Internet Seguro, un derecho humano
	Campaña 08	Inclusión de personas con discapacidad, Festival de Inclusión

Mes	Número de campaña	Tema
Marzo	Campaña 09	Detengamos el Contagio
	Campaña 10	Derechos de las mujeres
	Campaña 11	Campaña 8M cambiando actitudes
	Campaña 12	Como obtener vacuna covid19 para adultos mayores
	Campaña 13	Que hacer en Semáforo Amarillo COVID19
	Campaña 14	Personas con discapacidad
	Campaña 15	Uso correcto del cubrebocas
	Campaña 16	Salud Mental, un derecho humano
	Campaña 17	Nueva CEPA Británica de COVID-19
Abril	Campaña 18	Semáforos Epidemiológicos
	Campaña 19	Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes
	Campaña 20	Conoce tus derechos
	Campaña 21	Concientización de Derechos Niñas, Niños y Adolescentes
	Campaña 22	Desarrollo Sustentable, un derecho humano
	Campaña 23	Reciclaje, cuidado al medio ambiente
	Campaña 24	Cepas Variantes de COVID-19
Mayo	Campaña 25	Datos informativos de la Lactancia Materna como derecho humano
	Campaña 26	Beneficios de la lactancia materna
	Campaña 27	Evitemos el contagio de COVID-19
	Campaña 28	Todos contra el COVID-19
	Campaña 29	¿Conoces la Violencia Obstétrica?
	Campaña 30	Derechos de los docentes
	Campaña 31	Derechos de los estudiantes
	Campaña 32	Detengamos el contagio por COVID-19
	Campaña 33	Recomendaciones para una vida saludable
	Campaña 34	Recomendaciones después de vacunarse contra el COVID-19

Mes	Número de campaña	Tema
Junio	Campaña 35	Qué pasa al dejar de fumar, derecho a la salud
	Campaña 36	Consejos para cuidar el medio ambiente
	Campaña 37	Casi semáforo verde, medidas de prevención del contagio por COVID-19
	Campaña 38	Derechos de las Personas LGBTTTIQ+
	Campaña 39	Di NO a la Xenofobia
	Campaña 40	Qué hacer en Semáforo Verde
Julio	Campaña 41	Campaña contra la Trata de Personas
	Campaña 42	Evitemos los Estereotipos de género
	Campaña 43	Vacaciones seguras, Prevención de Accidentes
	Campaña 44	Violencia digital, medidas de prevención
	Campaña 45	Protocolos de Protección Civil para Personas con Discapacidad
Agosto	Campaña 46	Semana de la lactancia materna
	Campaña 47	Derechos de los pueblos indígenas
	Campaña 48	Recomendaciones después de vacunarse
	Campaña 49	¿Qué hacer después de vacunarse?
	Campaña 50	Discapacidad Psicosocial
	Campaña 51	Derechos de Adultos Mayores
Septiembre	Campaña 52	Derechos de Adultos Mayores (continúa la campaña de agosto)
	Campaña 53	Semáforo amarillo
	Campaña 54	Derechos de los periodistas
Octubre	Campaña 55	Salud Mental, un derecho humano
	Campaña 56	Día internacional de la niña
	Campaña 57	Sensibilización del Cáncer de Mama
	Campaña 58	Encuesta infantil
	Campaña 59	Convocatoria Distintivo de Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad 2021

Mes	Número de campaña	Tema
Noviembre	Campaña 60	Convocatoria Distintivo de Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad 2021
	Campaña 61	No a la violencia contra la mujer
	Campaña 62	Convocatoria al Premio Estatal de Derechos Humanos "Tenamaxtle" 2021
Diciembre	Campaña 63	Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos
	Campaña 64	Derechos de las personas con discapacidad
	Campaña 65	Variante Ómicron del virus COVID-19
	Campaña 66	Prevención de embarazo adolescente

Fuente: Información de la Dirección de Comunicación Social de la CDHEZ.
Los datos comprenden la información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021.

III.2.6. Información enviada a los Medios de Comunicación Social

En el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021, se enviaron 31 boletines a los medios de comunicación social, difundiendo el quehacer de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas.

Boletines enviados a los Medios de Comunicación en el año 2021

Mes	Tema	Número de Boletín	Fecha
Enero	La labor policial es una labor esencial para la paz y la tranquilidad: Domínguez	01/2021	2 de enero de 2021
Enero	Ma. de la Luz Domínguez Campos Presenta su Quinto Informe de	02/2021	27 de enero de 2021
Febrero	El IMSS otorga a la CDHEZ Distintivo de Seguridad Sanitaria	03/2021	16 de febrero de 2021
Febrero	La CDHEZ otorga el "Distintivo de Inclusión Laboral de Personas con	04/2021	18 de febrero de 2021
Febrero	Presentan Tercer Festival de Arte, Inclusión y Cultura de la Paz	05/2021	19 de febrero de 2021
Marzo	Urgente erradicar la violencia contra las mujeres: Ombudsperson	06/2021	8 de marzo de 2021
Marzo	Firman convenio por la bioética y los derechos humanos	07/2021	9 de marzo de 2021
Marzo	Impulsan la formación y profesionalización del personal en el	08/2021	17 de marzo de 2021
Marzo	Presentan el libro "Situación Social y de Maltrato en Personas Adultas Mayores en	09/2021	23 de marzo de 2021
Marzo	Presidenta de la CDHEZ llama a Diputadas y Diputados a Legislar sobre el	10/2021	31 de marzo de 2021
Abril	CDHEZ y CNDH piden a autoridades migratorias protección integral de las	11/2021	29 de abril de 2021

Mes	Tema	Número de Boletín	Fecha
Junio	La CDHEZ y la UAF promoverán los derechos humanos entre los Fresnillenses	12/2021	17 de junio de 2021
Septiembre	El IZAI otorga reconocimiento a la CDHEZ en Transparencia y Acceso a la	13/2021	2 de septiembre de 2021
Octubre	La CDHEZ presenta el mural “Ausencia”, en homenaje a las personas	14/2021	2 de octubre de 2021
Octubre	Lamentable que se violente la dignidad humana de los migrantes: Domínguez	15/2021	8 de octubre de 2021
Octubre	Llama CDHEZ, CDHJ, CEDHD y la protección de las comunidades indígenas	16/2021	11 de octubre de 2021
Octubre	La CDHEZ realiza Foro Planeación Democrática Municipal con perspectiva	17/2021	15 de octubre de 2021
Octubre	La CDHEZ y la UNID Zacatecas firman convenio de colaboración	18/2021	19 de octubre de 2021
Octubre	Necesario un Plan Estatal de Desarrollo con enfoque de Derechos Humanos:	19/2021	26 de octubre de 2021
Octubre	La CDHEZ convoca a participar en el Distintivo de Inclusión Laboral de	20/2021	28 de octubre de 2021
Noviembre	Se reúne CDHEZ y CNDH con Cónsules y autoridades del SEDIF, INM y SSP para	21/2021	4 de noviembre de 2021
Noviembre	La CDHEZ convoca al Premio de Estatal de Derechos Humanos “Tenamaxtle 2021”	22/2021	9 de noviembre de 2021
Noviembre	La CDHEZ realiza Taller para el Diseño del Plan Municipal de Desarrollo y	23/2021	11 de noviembre de 2021
Noviembre	La CDHEZ llama a las autoridades a implementar acciones en favor de las	24/2021	22 de noviembre de 2021
Noviembre	CDHEZ rinde homenaje a Tenamaxtle	25/2021	26 de noviembre de 2021
Noviembre	Ombudsperson exhorta a Presidentes(as) municipales a garantizar mejores	26/2021	30 de noviembre de 2021
Diciembre	Convocan al Concurso de Cortometraje, Dibujo y Cuento del Festival de Arte,	27/2021	1 de diciembre de 2021
Diciembre	Marcha la CDHEZ en el marco del Día Mundial del SIDA	28/2021	1 de diciembre de 2021
Diciembre	La CDHEZ y el Ayuntamiento de Guadalupe refrendan compromiso por los	29/2021	9 de diciembre de 2021
Diciembre	La CDHEZ reconoce a Colectivos de Personas Desaparecidas con el Premio de	30/2021	17 de diciembre de 2021
Diciembre	La CDHEZ y la Defensoría Pública signan Convenio de Colaboración	31/2021	21 de diciembre de 2021

Fuente: Información de la Dirección de Comunicación Social de la CDHEZ.
Los datos comprenden la información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021.

OBSERVANCIA
DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL ESTADO

IV. Observancia de los Derechos Humanos en el Estado

El mero reconocimiento de los derechos humanos no asegura su disfrute. Para ello, es necesario que la acción estatal se encamine a materializar sus contenidos y darle así efectividad al ejercicio de éstos. Así, la Comisión debe contar con mecanismos institucionales que le permitan analizar si el Estado se ocupa de darle efectividad al ejercicio de los derechos humanos de las personas, detectando así cuáles son las áreas que tienen que ser reforzadas.

En adición, las actividades de supervisión buscan que la garantía de los derechos humanos sea eficiente y de calidad, de forma que todas las personas tengamos la capacidad de disfrutarlos en igualdad de condiciones. En este sentido, la Comisión tiene el deber de velar que el Estado organice su aparato institucional y estructural al libre y pleno ejercicio de los derechos humanos; para lo cual, deberá no sólo proveer recursos para ello, sino remover las restricciones que inciden negativamente el en ejercicio de éstos.

VI.1. Sistema Penitenciario

El Derecho Internacional, establece una serie de obligaciones a los Estados, relativas a respetar y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentran privadas de su libertad –procesadas y sentenciadas– tales como el respeto a su dignidad, vida e integridad física, psicológica y moral. Lo cual es indispensable para el logro de la pena privativa de la libertad y la reinserción social de los sentenciados.

Al respecto, tanto en el Sistema Universal de Derechos Humanos como en el Sistema Interamericano, se han emitido una serie de normas y principios previstos en Tratados, Protocolos, Resoluciones, buenas prácticas y otros principios, que contienen derechos sustantivos, órganos y mecanismos de protección, que buscan asegurar que la privación de la libertad cumpla con su propósito y no conlleve a la violación de otros derechos fundamentales. Particularmente los Estados que han suscrito dichos instrumentos se han obligado a garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos de todas las personas que estén sujetas a su jurisdicción, así como a respetar el derecho al acceso a la justicia y al debido proceso.

Nuestro país forma parte de dichos sistemas, por lo tanto, ha ratificado diversos instrumentos internacionales mediante los cuales ha asumido las obligaciones y deberes de respetar, proteger, y realizar los derechos humanos de esta población.

Obligación que de manera específica se establece en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el Título Primero, Capítulo I, en el que mandata las obligaciones a las autoridades de todos los órdenes de gobierno de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de *universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad*[1].

Desde esta perspectiva, los derechos de las personas en reclusión, "...salvo aquellos explícitamente restringidos en la Constitución, no se suspenden al ingresar a un reclusorio. El Estado está obligado a garantizar los derechos fundamentales de toda persona en reclusión, como lo está con cualquier otra persona. Una persona cuyos derechos fundamentales son violentados dentro de un reclusorio tiene, legalmente, la misma protección que una persona cuyos derechos son violentados afuera"[2].

[1]Pérez Correa Catalina, De la Constitución a la Prisión. Derechos Fundamentales y Sistema Penitenciario. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Disponible en https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3033/10.pdf, fecha de consulta 9 de ENERO de 2019.
[2]Contreras Nieto Miguel Ángel, Temas de derechos humanos, México, Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, 2003, p. 18.

"El Estado puede privar a las personas de su libertad para deambular, pero no está legitimado para privarlas de la vida, de sus derechos a comer, trabajar, estudiar y tener una habitación digna, entre otros"[3].

Así entonces, a las personas en reclusión se les suspenden y limitan determinados derechos, pero de ninguna manera se les pueden restringir aquellos que son inherentes a su dignidad humana.

De acuerdo a las normas nacionales la suspensión de derechos de las personas privadas de su libertad en los casos de imposición de una pena de prisión se circunscribe a la limitación a la libertad de tránsito y a la suspensión de derechos político-electorales. Y respecto a la limitación de derechos, se justifica en la facultad de "restricción que puede hacer el Estado en caso de necesidad, para garantizar el cumplimiento efectivo de la pena, pero sólo por tiempo limitado..."[4], por consiguiente, estos derechos no deben restringirse por completo ni de forma permanente..."[5].

Así entonces, las personas en reclusión poseen derechos intangibles que "...no pueden ser limitados ni restringidos bajo ninguna circunstancia. Se trata de obligaciones plenas que el Estado debe cumplir y no puede contravenir en aras de imponer la pena. Las obligaciones que el Estado tiene frente a los y las personas reclusas, son mayores, ya que opta por una opción de sanción, que hace a las personas en reclusión, vulnerables, dependientes e incapaces de satisfacer, por sí mismas sus necesidades básicas. Ante la situación de vulnerabilidad que ha generado, el Estado está obligado a garantizar no sólo el derecho a la vida, a la integridad física, a la salud, sino también a cubrir las necesidades básicas del detenido (a) o a proveer los medios para que por sí mismo pueda hacerlo...[6]" Particularmente la Carta Magna establece en su artículo 18 que "...el sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto..."; y la Ley Nacional de Ejecución Penal, vigente a partir del dieciséis de junio de dos mil dieciséis, define –en su artículo 3°– al sistema penitenciario, como el conjunto de normas jurídicas y de instituciones del Estado, que tiene por objeto la supervisión de la prisión preventiva y la ejecución de sanciones penales, así como de las medidas de seguridad derivadas de una sentencia, el cual está organizado sobre la base del respeto de los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción de la persona sentenciada a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir.

En ese sentido, se precisa que dicho sistema, está organizado sobre la base del respecto a los derechos humanos; que invocando lo dispuesto por el párrafo tercero del artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, adicionado en fecha diez de junio de dos mil once, corresponde a las autoridades en el ámbito de sus competencias, la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Asimismo, el artículo 102 apartado B de nuestra Carta Magna, establece que el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán organismos de protección de los

[3] Idem
[4] Idem
[5] Idem
[6] Idem

derechos humanos; de ahí que con independencia de la obligación que le asiste al Estado el reconocimiento y respeto a los derecho fundamentales, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y las diversas de las entidades federativas y en especial, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas; tiene a su cargo vigilar el cumplimiento a lo previsto en el contenido del párrafo tercero del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Para ello, dentro de estas atribuciones, corresponde participar de manera conjunta con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en la supervisión nacional de los Centros Regionales de Reinserción Social del Estado de Zacatecas, incluyendo los doce Establecimientos Penitenciarios Distritales, donde se supervisa las condiciones de infraestructura de los centros penitenciarios y las condiciones personales en que se encuentran las personas privadas de su libertad.

Asimismo, y como atribución propia, según lo dispone el artículo 7° fracción XVIII de la ley que rige su actuar; también supervisa y vigila el respeto a los derechos humanos en los en los diversos establecimientos de detención o reclusión, como separos preventivos de las Policías Ministerial o Municipal y Centros de Internamiento y Atención Integral Juvenil.

Con base a dichas disposiciones constitucionales y legales este Organismo Protector de los Derechos Humanos, a través de su Departamento de Sistema Penitenciario, vigila el respeto a los derechos humanos en los tratamientos establecidos para la reinserción social de las personas privadas de su libertad por la comisión comprobable de un acto ilícito; velando, sobre todo, que estos se ajusten y apliquen en la medida y forma que se requiere.

Asimismo, asistiendo de manera personal con el interno y supervisando que el sistema penitenciario se organice sobre las bases del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte, como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y que una vez que obtenga su libertad, no vuelva a delinquir.

Además, supervisando los separos preventivos, a efecto de verificar que, se respeten plenamente los derechos de las personas detenidas.

VII.1.1. Sistema Penitenciario

De conformidad a lo dispuesto en los artículos 102 apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde a los organismos públicos defensores de los derechos humanos en lo particular, supervisar que sean respetados y garantizados los derechos humanos de las personas en reclusión, al ser consideradas como un grupo en situación de vulnerabilidad por estar privados de la libertad, y en lo general, a vigilar que el sistema penitenciario se organice sobre las bases del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte, como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad, –a través de una actividad lícita– y procurar que no vuelva a delinquir, como lo dispone el artículo 18 de la Carta Magna.

Con esa base constitucional y lo mandatado en el artículo 23 de la Constitución Política del Estado de Zacatecas, y 8 fracciones XII, XVIII y XIX de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, corresponde a este Organismo Público Defensor de los Derechos Humanos, vigilar que el sistema estatal penitenciario en el estado de Zacatecas, se organice sobre las bases del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte, como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad.

En cumplimiento a estas atribuciones el Organismo Público Defensor de los Derechos Humanos en Zacatecas y conforme a lo establecido en la Guía Nacional de Supervisión Penitenciaria que utiliza la Comisión Nacional de Derechos Humanos para la elaboración del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, se llevaron a cabo supervisiones a los Centros de Reinserción Social del Estado, al Centro de Internamiento y Atención Integral Juvenil, a los Establecimientos Penitenciarios Distritales, a los Separos Preventivos en el Estado de Zacatecas y a los Separos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas.

IV.1.1.1. Supervisión Penitenciaria a Centros de Reinserción Social en el Estado

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) realiza desde el año 2006 el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, a la cual acompañan los Organismos Defensores de los Derechos Humanos en las entidades federativas.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas realizó supervisiones a los Centros de Reinserción Social en el Estado en el segundo semestre del ejercicio 2021 y a los Separos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas y Fiscalía Especializada en Combate al Delito de Secuestro.

Supervisiones efectuadas

Supervisiones	Fecha
Fiscalía Especializada en Combate al Delito de Secuestro	26 de agosto de 2021
Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo	16 de noviembre de 2021
Centro Regional de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas	25 de noviembre de 2021
Centro Estatal de Reinserción Social Femenil Cieneguillas	30 de noviembre de 2021
Separos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ)	10 de diciembre de 2021

Fuente: Sistema Penitenciario de la CDHEZ.
Los datos comprenden del 1 de julio al 31 de diciembre de 2021.

IV.1.1.2. Supervisión a los Establecimientos Penitenciarios Distritales de Reinserción Social y al Centro de Internamiento y Atención Integral Juvenil (CIAIJ)

Supervisiones a Establecimientos Penitenciarios en el Segundo Semestre del año 2021

Supervisiones	Fecha
Establecimiento Penitenciario Distrital de Ojocaliente	15 de julio de 2021
Establecimiento Penitenciario Distrital de Jerez de García Salinas	6 de agosto de 2021

Supervisiones	Fecha
Establecimiento Penitenciario Distrital de Calera de Víctor Rosales	18 de agosto de 2021
Establecimiento Penitenciario Distrital de Sombrerete	23 de agosto de 2021
Establecimiento Penitenciario Distrital de Tlaltenango de Sánchez Román	20 de agosto de 2021
Establecimiento Penitenciario Distrital de Jalpa	20 de agosto de 2021
Establecimiento Penitenciario Distrital de Miguel Auza	27 de agosto de 2021
Establecimiento Penitenciario Distrital de Río Grande	27 de agosto de 2021
Establecimiento Penitenciario Distrital de Pinos	1 de septiembre de 2021
Establecimiento Penitenciario Distrital de Loreto	7 de septiembre de 2021
Establecimiento Penitenciario Distrital de Concepción del Oro	7 de septiembre de 2021
Establecimiento Penitenciario Distrital de Valparaíso	8 de septiembre de 2021
Centro de Internamiento y Atención Integral Juvenil (C.I.A.I.J.)	1 de diciembre de 2021

Fuente: Sistema Penitenciario de la CDHEZ.
Los datos comprenden del 1 de julio al 31 de diciembre de 2021.
La información comprende las supervisiones efectuadas en los Establecimientos Penitenciarios y el Centro de Internamiento y Atención Integral Juvenil (CIAIJ) del 15 de julio al 1 de diciembre de 2021.
Nota: Conforme al proyecto de clausura de centros penitenciarios de baja densidad de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas, durante los años 2018, 2019 y 2020 se han cerrado los establecimientos penitenciarios distritales de Juchipila, Teúl de González Ortega, Villanueva y Nochistlán, por lo cual desde el año 2020 solo existen 12 establecimientos penitenciarios distritales en el Estado en funciones.

IV.1.1.3. Capacidad instalada, población y sobrepoblación penitenciaria en el estado de Zacatecas

Capacidad instalada, población y sobrepoblación penitenciaria en los Centros y Establecimientos Penitenciarios en el estado de Zacatecas

Centro/ Establecimiento	Capacidad Instalada			Población			Custodios
	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	
Centro Regional de Reinserción Social Varonil Cieneguillas	1,264	X	1,264	1153	X	1153	113
Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo	369	X	369	263	X	263	58
Centro Estatal de Reinserción Social Femenil Cieneguillas	X	165	165	X	211	211	46
Centro de Internamiento y Atención Integral Juvenil (C.I.A.I.J.)	100	37	137	103	21	124	39

Centro/ Establecimiento	Capacidad Instalada			Población			Custodios
	Hombres	Mujeres	Total	Hombres	Mujeres	Total	
Establecimiento Penitenciario Distrital de Calera de Víctor Rosales	45	X	45	30	X	30	14
Establecimiento Penitenciario Distrital de Concepción del Oro	20	X	20	21	X	21	10
Establecimiento Penitenciario Distrital de Jalpa	44	X	44	49	X	49	16
Establecimiento Penitenciario Distrital de Jerez de García Salinas	70	X	70	86	X	86	10
Establecimiento Penitenciario Distrital de Loreto	20	X	20	33	X	33	7
Establecimiento Penitenciario Distrital de Miguel Auza	20	X	20	17	X	17	11
Establecimiento Penitenciario Distrital de Ojocaliente	108	X	108	54	X	54	14
Establecimiento Penitenciario Distrital de Pinos	55	X	55	44	X	44	13
Establecimiento Penitenciario Distrital de Río Grande	120	X	120	43	X	43	14
Establecimiento Penitenciario Distrital de Sombrerete	75	X	75	58	X	58	13
Establecimiento Penitenciario Distrital de Tlaltenango de Sánchez Román	47	X	47	44	X	44	18
Establecimiento Penitenciario Distrital de Valparaíso	45	X	45	20	X	20	9

Fuente: Sistema Penitenciario de la CDHEZ.
Nota: Conforme al proyecto de clausura de centros penitenciarios de baja densidad de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas, durante los años 2018, 2019 y 2020 se cerraron los establecimientos penitenciarios distritales de Juchipila, Teúl de González Ortega, Villanueva y Nochistlán, por lo cual, en el año 2021 sólo existen 12 establecimientos penitenciarios distritales en el Estado en funciones.
Los datos fueron obtenidos en las supervisiones efectuadas del 15 de julio al 1 de diciembre de 2021.

IV.1.1.4. Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) realiza desde el año 2006 el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, la cual se efectúa con el acompañamiento de los Organismos Defensores de los Derechos Humanos en las entidades federativas, en dicha evaluación muestra la calificación que ha obtenido conforme a la Guía Nacional de Supervisión Penitenciaria.

De lo anterior se derivan los resultados del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria del 2006 al 2020, mismo que muestra los siguientes datos:

DIAGNÓSTICO NACIONAL DE SUPERVISIÓN PENITENCIARIA DEL 2006 AL 2020

Año	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Calificación	5.92	6.22	6.45	6.48	6.59	6.41	6.28	6.1	6.02	6.21	6.27	6.3	6.45	6.75	6.79

Fuente: Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

IV.1.1.5. Comparativo del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria de los años 2006 al 2020

COMPARATIVO DNSP 2006 A 2020

Estado	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Aguascalientes	6.6	6.4	6.9	8.5	7.5	8.5	8.1	7.9	7.6	7.8	8	7.6	7.5	7.7	7.47
Baja California	6	6.2	6.4	6.7	6.8	6.6	6.3	6.8	7.2	7.4	7.4	7.5	7.3	7.2	7.6
Baja California Sur	5.6	4.4	4.7	5.5	5.7	6.6	6	6	5.5	5.5	5.8	5.1	5	6.2	6.02
Campeche	6.3	6.7	6.5	6.7	6.8	6.4	5.5	6	5.6	5.9	6.6	6.8	6.4	7.3	6.26
Chiapas	5.7	5.2	6	5.9	6.2	6.4	6	6.2	5.6	5.3	5.4	6	6	6.3	6.1
Chihuahua	7.7	7.5	7.4	7.3	7	7.1	7	6.3	6.8	7.4	7.5	7.4	7.2	7.4	7.47
Ciudad de México	S/C	5.8	4.9	3.7	5.3	6	5.9	6	6.6	6.8	6.9	6.9	7.3	7.5	8.06
Coahuila	6.1	7.5	8.4	8.3	7.1	5.2	6	5.2	6.3	7.2	7.7	7.7	8	8	8
Colima	5.6	6.2	7.3	6.8	6.8	6.7	7	6.7	6.6	5.9	6.4	7.1	6.6	6.8	6.52
Durango	6	7.5	8.2	6.2	6.3	6.6	6.2	6.4	6.4	6.1	6.5	6.6	6.4	6.6	6.62
Estado de México	6.3	6.6	6.5	6.4	6.4	5.9	5.6	6	6	6.7	6.4	6.3	6.2	6.2	6.62
Guanajuato	6.9	7.1	7.1	7.1	7.4	7.9	7.8	7.5	7.6	8	8.2	8.2	8.2	8	8.04
Guerrero	5.4	4	4.6	4.6	5.3	5.1	5.9	4.8	5	5	4.4	4.2	5.2	5.9	6.28
Hidalgo	5.6	5.8	5.6	5.8	6	6.4	5.8	5.4	5.4	5	4.6	4.8	5.3	6.1	5.16
Jalisco	7.1	6.9	7.7	8	8.4	7.5	7.2	7	6.7	6.9	7.1	7	7.1	7.1	7.25
Michoacán	S/C	5.8	6.8	7.1	7.6	6.8	6.5	6.4	5.9	6.2	6.1	6.5	6.5	6.1	6.48
Morelos	S/C	5.8	5.9	5.1	5.8	6.4	6.2	5.9	5.5	6.3	6.4	6.9	7	6.5	6.47
Nayarit	5.7	5.5	4.8	5.3	4.6	4.6	4.7	4.1	4	4.1	4.4	4.2	5	6.2	4.83
Nuevo León	7.3	7.3	6.7	7	7	5.8	5.8	5.4	5.2	5.7	5.5	5	6	6.2	8.06
Oaxaca	S/C	5.6	5.4	5.6	5.8	5.2	5.2	5.1	5.1	5.6	5.3	6	6.1	6.7	6.01
Puebla	7.3	7.8	7.8	7.8	7.7	7	6.8	6.8	6.8	6.7	7	6.4	6.1	6	5.94

Estado	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Querétaro	6.4	7.4	7.8	7.5	8.6	7.8	7.5	7.4	7.3	7.1	7.7	8.1	8.2	8.2	8.47
Quintana Roo	5.7	5.9	5.9	4.5	4.5	5.4	4.9	4	3.7	4.4	4.7	5	6.1	6.2	7
San Luis Potosí	4.2	5.6	7.2	7.1	6.2	6.8	6.6	6.6	6.1	6.5	6.3	6.6	6.5	7	7.49
Sinaloa	3.7	3	3.7	3.7	3.9	6.1	6.1	5.8	5.3	5.7	5.9	5.6	5.6	6.1	5.98
Sonora	5.3	6.6	7.1	7.6	8.3	6.8	6.8	5.9	6.3	6.4	6	6.5	7.1	7.5	5.94
Tabasco	3.8	4.5	4	4.1	4	4.9	5.7	5.1	4.9	5.1	5.3	5.6	6	6.1	6.1
Tamaulipas	5.7	7	7.6	7.8	8	5.9	5.7	5.4	5.1	5.3	5	4.7	4.9	5.4	5.24
Tlaxcala	5.8	6.7	7.5	8.3	8.6	7.8	7.3	7.6	7.4	7.3	7.1	7	7.5	8.1	8.1
Veracruz	6	7.6	7.1	7.9	7.9	6.6	7	7.2	6.9	6.8	6.5	6	5.9	5.9	7.1
Yucatán	5.3	6.3	6	6.5	6.6	6.1	6.3	5.8	6	6.4	6.9	6.8	6.8	7.2	7.48
Zacatecas	6.88	7.2	7.07	7.21	7.1	6.51	5.7	6.47	6.04	6.38	6.03	5.52	5.53	6.16	7.01
TOTAL	5.9	6.2	6.5	6.5	6.6	6.41	6.28	6.1	6.02	6.21	6.27	6.3	6.45	6.75	6.79

Fuente: Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2020.
Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

IV.1.1.6. Evaluación General del Estado de Zacatecas en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria

La Evaluación General del Estado de Zacatecas conforme a los resultados históricos del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria del 2006 al 2020, muestra una calificación a nivel general ascendente del año 2020 con relación al año 2019 de acuerdo a los siguientes datos:

EVALUACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE ZACATECAS DIAGNÓSTICO NACIONAL DE SUPERVISIÓN PENITENCIARIA DEL 2006 AL 2020

Año	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Calificación	6.88	7.2	7.07	7.21	7.1	6.51	5.7	6.47	6.04	6.38	6.03	5.52	5.53	6.16	7.01

Fuente: Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

DIAGNÓSTICO NACIONAL DE SUPERVISIÓN PENITENCIARIA 2019 Y 2020

Centro	2019	2020
Centro Estatal de Reinserción Social Femenil Cieneguillas, Zacatecas	7.03	---
Centro Regional de Reinserción Social Varonil Cieneguillas, Zacatecas	5.51	6.97
Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo, Zacatecas	5.95	7.06

Fuente: Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

TENDENCIA ESTATAL POR RUBRO*

Calificacióny tendencia nacional		I. Aspectos que garantizan la integridad de las personas privadas de la libertad		II. Aspectos que garantizan una estancia digna		III. Condiciones de Gobernabilidad		IV. Reinserción Social de las Personas Privadas de la libertad		V. Grupos de personas privadas de la libertad con necesidades específicas	
!	▲	!	▲	!	▲	!	▲	!	▲	✓	▲

EVALUACIÓN DE CENTROS POR RUBRO

Centros	I.	II.	III.	IV.	V.
Centro Regional de Reinserción Social Varonil Cieneguillas	!	X	!	!	✓
Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo	!	!	!	!	✓

EVALUACIÓN DE CENTROS POR RUBRO

Centros	Capacidad		Población		2020	
	H	M	H	M	Evaluación	Tendencias
Centro Regional de Reinserción Social Varonil Cieneguillas	1,264		1,170		!	▲
Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo	369		328		!	▲

* **Fuente:** Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, 2020.

IV.1.2. Atenciones penitenciarias

Del 1 de julio al 31 de Diciembre de 2021 se efectuaron 228 atenciones penitenciarias, de las cuales 171 son asesorías penitenciarias y 57 gestiones penitenciarias.

Atenciones Penitenciarias Segundo Semestre de 2021

Tipo de atención:	Total
Asesorías Penitenciarias	171
Gestiones Penitenciarias	57
Total	228

Fuente: Sistema Penitenciario de la CDHEZ
La información comprende las supervisiones efectuadas del 1 de julio al 31 de diciembre de 2021.

IV.1.2.1. Asesorías Penitenciarias

En el periodo que se informa la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) brindó 171 asesorías penitenciarias en los rubros que a continuación se detallan:

Asesorías Penitenciarias del segundo semestre del año 2021

Clasificación	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Personas Privadas de la libertad en situación vulnerable	20	8	18	15	12	12	85
Desarrollo de procedimiento penal y su situación legal	11	5	15	17	5	7	60
Requisitos para obtención de beneficios de ley	0	0	0			0	0
Gestión con instituciones	8	6	4	3	1	2	24
Otro	1	0	1			0	2
Total	40	19	38	35	18	21	171

Fuente: Sistema Penitenciario de la CDHEZ
La información comprende las supervisiones efectuadas del 1 de julio al 31 de diciembre de 2021.

IV.1.2.2. Gestiones Penitenciarias

En el periodo que se informa la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) realizó 57 gestiones penitenciarias.

Gestiones Penitenciarias del Segundo Semestre del año 2021

No.	No. Gestión	EDAD	SEXO	Autoridad
1	CDHEZ/G/ZAC/SP/278/2021	55	Hombre	Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Zacatecas
2	CDHEZ/G/ZAC/299/2021	65	Hombre	Instituto de la Defensoría Pública Federal
3	CDHEZ/G/ZAC/SP/301/2021	20	Mujer	Centro de Internamiento y Atención Integral Juvenil del Estado de Zacatecas (CIAIJZ)
4	CDHEZ/G/ZAC/SP/302/2021	19	Mujer	Centro de Internamiento y Atención Integral Juvenil del Estado de Zacatecas (CIAIJZ)
5	CDHEZ/G/ZAC/SP/303/2021	18	Mujer	Centro de Internamiento y Atención Integral Juvenil del Estado de Zacatecas (CIAIJZ)
6	CDHEZ/G/ZAC/SP/304/2021	18	Mujer	Centro de Internamiento y Atención Integral Juvenil del Estado de Zacatecas (CIAIJZ)
7	CDHEZ/G/ZAC/306/2021	31	Hombre	Centro Regional de Reinserción Social Varonil Cieneguillas
8	CDHEZ/G/ZAC/SP/312/2021	48	Mujer	Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua
9	CDHEZ/G/ZAC/SP/313/2021	46	Mujer	Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Zacatecas
10	CDHEZ/G/VRF/321/2021	33	Hombre	Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo
11	CDHEZ/G/ZAC/327/2021	74	Hombre	Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)
12	CDHEZ/G/ZAC/SP/346/2021	24	Mujer	Instituto de la Defensoría Pública Federal
13	CDHEZ/G/ZAC/SP/347/2021	56	Mujer	Centro Regional de Reinserción social Varonil Cieneguillas
14	CDHEZ/G/ZAC/SP/348/2021	33	Mujer	Centro Regional de Reinserción social Varonil Cieneguillas

No.	No. Gestión	EDAD	SEXO	Autoridad
15	CDHEZ/G/ZAC/SP/361/2021	Sin datos	Hombre	Centro Regional de Reinserción social Varonil Cieneguillas y Establecimiento Penitenciario Distrital de Jerez, Zacatecas
16	CDHEZ/G/ZAC/SP/362/2021	Sin datos	Hombre	Centro Estatal de Reinserción Social Femenil Cieneguillas
17	CDHEZ/G/ZAC/SP/363/2021	19	Mujer	Centro Estatal de Reinserción Social Femenil Cieneguillas
18	CDHEZ/G/ZAC/SP/376/2021	32	Mujer	Centro Estatal de Reinserción Social Femenil Cieneguillas
19	CDHEZ/G/ZAC/SP/377/2021	40	Mujer	Centro Estatal de Reinserción Social Femenil Cieneguillas
20	CDHEZ/G/ZAC/SP/378/2021	Sin datos	Mujer	Centro Estatal de Reinserción Social Femenil Cieneguillas
21	CDHEZ/G/ZAC/SP/379/2021	62	Mujer	Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ)
22	CDHEZ/G/ZAC/SP/380/2021	25	Mujer	Centro Estatal de Reinserción Social Femenil Cieneguillas
23	CDHEZ/G/ZAC/SP/381/2021	37	Mujer	Centro Estatal de Reinserción Social Femenil Cieneguillas
24	CDHEZ/G/ZAC/SP/383/2021	39	Hombre	Establecimiento Penitenciario Distrital de Tlaltenango de Sánchez Román y Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Zacatecas
25	CDHEZ/G/ZAC/391/2021	36	Mujer	Centro Regional de Reinserción Social Varonil Cieneguillas
26	CDHEZ/G/ZAC/SP/392/2021	73	Hombre	Establecimiento Penitenciario Distrital de Pinos, Zacatecas
27	CDHEZ/G/ZAC/SP/393/2021	19	Mujer	Centro Regional de Reinserción Social Varonil Cieneguillas
28	CDUEZ/G/ZAC/SP/394/2021	39	Mujer	Centro Regional de Reinserción Social Varonil Cieneguillas
29	CDHEZ/G/CRF/395/2021	39	Hombre	Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo

No.	No. Gestión	EDAD	SEXO	Autoridad
30	CDHEZ/G/VRF/490/2021	48	Hombre	Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Zacatecas
31	CDHEZ/G/VRF/491/2021	Sin datos	Mujer	Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Género, en el Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas
32	CDHEZ/G/VRR/492/2021	42	Hombre	Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Zacatecas
33	CDHEZ/G/VRP/494/2021	35	Hombre	Establecimiento Penitenciario de Pinos, Zacatecas
34	CDHEZ/G/VRF/490/2021	48	Hombre	Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Zacatecas
35	CDHEZ/G/VRR/492/2021	42	Hombre	Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Zacatecas
36	CDHEZ/G/VRP/494/2021	35	Hombre	Establecimiento Penitenciario de Pinos, Zacatecas
37	CDHEZ/G/ZAC/SP/501/2021	55	Mujer	Centro Estatal de Reinserción Social Femenil Cieneguillas
38	CDHEZ/G/ZAC/SP/502/2021	46	Mujer	Centro Estatal de Reinserción Social Femenil Cieneguillas
39	CDHEZ/G/ZAC/SP/503/2021	31	Mujer	Centro Regional de Reinserción Social Varonil Cieneguillas
40	CDHEZ/G/ZAC/535/2021	48	Hombre	Centro Regional de Reinserción Social Varonil Cieneguillas
41	CDHEZ/G/ZAC/SP/540/2021	55	Mujer	Centro Regional de Reinserción Social Varonil Cieneguillas
42	CDHEZ/G/ZAC/SP/604/2021	40	Hombre	Centro Regional de Reinserción Social Varonil Cieneguillas
43	CDHEZ/G/ZAC/SP/605/2021	45	Mujer	Centro Regional de Reinserción Social Varonil Cieneguillas
44	CDHEZ/G/ZAC/SP/618/2021	47	Mujer	Establecimiento Penitenciario Distrital de Jerez de García Salinas, Zacatecas
45	CDHEZ/G/ZAC/SP/650/2021	56	Mujer	Establecimiento Penitenciario Distrital de Calera, Zacatecas

No.	No. Gestión	EDAD	SEXO	Autoridad
46	CDHEZ/G/ZAC/SP/691/2021	46	Mujer	Centro Regional de Reinserción Social Varonil Cieneguillas
47	CDHEZ/G/ZAC/SP/692/2021	73	Hombre	Establecimiento Penitenciario Distrital de Pinos, Zacatecas
48	CDHEZ/G/ZAC/SP/693/2021	50	Mujer	Centro Regional de Reinserción Social Varonil Cieneguillas
49	CDHEZ/G/ZAC/SP/698/2021	46	Mujer	Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)
50	CDHEZ/G/ZAC/SP/699/2021	58	Mujer	Centro Regional de Reinserción Social Varonil Cieneguillas
51	CDHEZ/G/ZAC/SP/712/2021	50	Mujer	Centro Regional de Reinserción Social Varonil Cieneguillas
52	CDHEZ/G/ZAC/SP/716/2021	64	Mujer	Centro Regional de Reinserción Social Varonil Cieneguillas
53	CDHEZ/G/ZAC/SP/719/2021	47	Hombre	Centro Regional de Reinserción Social Varonil Cieneguillas
54	CDHEZ/G/VRF/722/2021	27	Hombre	Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Zacatecas
55	CDHEZ/G/VRF/723/2021	36	Hombre	Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Zacatecas
56	CDHEZ/G/VRF/724/2021	31	Hombre	Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Zacatecas
57	CDHEZ/G/VRF/725/2021	68	Mujer	Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)

Fuente: Sistema Penitenciario de la CDHEZ
La información comprende las supervisiones efectuadas del 1 de julio al 31 de diciembre de 2021.

IV.1.2.3. Incidentes violentos en los Centros y Establecimientos Penitenciarios de Reinserción Social

CERERESO VARONIL DE CIENEGUILLAS, ZACATECAS INCIDENTES VIOLENTOS 2021

Fecha	Evento	Lesionados	Fallecidos
15 de enero de 2021	Motín	8	1
5 de marzo de 2021	Suicidio	0	1
29 de marzo de 2021 - 30 de marzo de 2021	Motín por traslado	192	0
1 de junio de 2021	Muerte por enfermedad	0	1
30 de junio de 2021	Riña	1	0
20 de julio de 2021	Riña	2	0
24 de julio de 2021	Riña	1	0
25 de agosto de 2021	Riña	1	0
9 de diciembre de 2021	Suicidio	0	1
Total		205	4

Fuente: Sistema Penitenciario de la CDHEZ.
Nota: Derivado del Motín por traslado del 29 y 30 de marzo de 2021, se tiene un registro de 192 lesionados, de los cuales, 41 de ellos fueron trasladados a centros penitenciarios federales.
Los datos comprenden información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021.

CERERESO VARONIL FRESNILLO, ZACATECAS INCIDENTES VIOLENTOS 2021

Fecha	Evento	Lesionados	Fallecidos
29 de marzo de 2021	Riña	3	0
Total		3	0

Fuente: Sistema Penitenciario de la CDHEZ.
Los datos comprenden información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021.

CERERESO FEMENIL DE CIENEGUILLAS, ZACATECAS INCIDENTES VIOLENTOS 2021

Fecha	Evento	Lesionados	Fallecidos
19 de junio de 2021	0	1	0
Total	0	1	0

Fuente: Sistema Penitenciario de la CDHEZ.
Los datos comprenden información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021.

ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS DISTRITALES DEL ESTADO DE ZACATECAS
INCIDENTES VIOLENTOS 2021

Establecimiento penitenciario distrital	Fecha	Evento	Lesionados	Fallecidos
Concepción del Oro, Zacatecas	28 de mayo de 2021	Riña	1	0
Concepción del Oro, Zacatecas	12 de julio de 2021	Riña	1	0
Ojocaliente, Zacatecas	14 de julio de 2021	Riña	1	0
Ojocaliente, Zacatecas	15 de julio de 2021	Riña	1	0
Concepción del Oro, Zacatecas	23 de julio de 2021	Riña	1	0
Loreto, Zacatecas	13 de octubre de 2021	Riña	1	0
Tlaltenango, Zacatecas	3 de noviembre de 2021	Homicidio	0	1
Ojocaliente, Zacatecas	2 de noviembre de 2021	Riña	2	0
Ojocaliente, Zacatecas	4 de noviembre de 2021	Riña	2	0
Total			10	1

Fuente: Sistema Penitenciario de la CDHEZ.
Los datos comprenden información del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021.

IV.1.2.4. Muertes causadas por COVID-19 en centros penitenciarios de la entidad

MUERTES CAUSADAS POR COVID19 EN CENTROS PENITENCIARIOS DE LA ENTIDAD

Fecha	Lugar	Fallecidos
19 de noviembre de 2020	CERERESO VARONIL CIENEGUILLAS	1
21 de noviembre de 2020	CERERESO VARONIL CIENEGUILLAS	1
24 de noviembre de 2020	CERERESO VARONIL CIENEGUILLAS	1
2 de diciembre de 2020	CERERESO VARONIL CIENEGUILLAS	1
2 de diciembre de 2020	CERERESO VARONIL CIENEGUILLAS	1
5 de diciembre de 2020	ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DISTRITAL DE LORETO	1
11 de diciembre de 2020	CERERESO VARONIL CIENEGUILLAS	1
13 de enero de 2021	CERERESO VARONIL FRESNILLO	1
Total		8

Fuente: Sistema Penitenciario de la CDHEZ.
Los datos comprenden información del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2021.

IV.1.2.5. Contagiados, Recuperados y Muertes de personas privadas de la libertad causadas por COVID19 en centros y establecimientos penitenciarios de la Entidad en el año 2021

PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD POSITIVAS A COVID-19

CENTRO PENITENCIARIO	CONTAGIADOS POR COVID-19	RECUPERADOS	MUERTES POR COVID-19	FECHA
Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo, Zacatecas	1	1	1	13 de enero de 2021
Centro Regional de Reinserción Social Varonil Cieneguillas, Zacatecas	1	1	0	17 de agosto de 2021
Centro Estatal de Reinserción Social Femenil Cieneguillas, Zacatecas	1	1	0	17 de agosto de 2021
Establecimiento Penitenciario Distrital de Sombrerete, Zacatecas	1	1	0	23 de agosto de 2021
Total	4	4	1	

Fuente: Sistema Penitenciario de la CDHEZ.
Los datos comprenden información del 1 de enero all 31 de diciembre de 2021.

IV.1.3 Supervisión a Separos Preventivos realizada durante 2021

El Derecho Internacional, Nacional y Local establece una serie de obligaciones a las autoridades municipales relativas a respetar y garantizar los derechos humanos de todas las personas que se encuentran privadas de su libertad por las presuntas infracciones a la Ley de Justicia Comunitaria del Estado, al Bando de Policía y Buen Gobierno, así como demás Reglamentos Gubernativos Municipales. En esa tesitura, corresponde a los Ayuntamientos y sus integrantes Presidentes, Presidentas, Síndicos, Síndicas, Regidoras y Regidores, así como a las autoridades vinculadas a la seguridad pública respetar, promover, proteger y garantizar el derecho a la vida, la integridad física, psicológica y moral, así como la dignidad de las personas privada de su libertad por la presunta infracción a normas administrativas.

En virtud a que la custodia y atención de las personas detenidas en separos preventivos deben cumplir con los estándares internacionales y respetar sus derechos humanos. Por lo anterior, cuando una persona es privada de su libertad por parte de una autoridad municipal, ésta tiene la obligación de tratarla humanamente y con absoluto respeto a su dignidad, lo que implica que se garantice un mínimo de bienestar respecto a las condiciones de alojamiento que deben tener las celdas donde se les priva de la libertad temporalmente, es decir, debe contar con óptimas condiciones de infraestructura, equipo, servicios y personal, tales como: adecuadas condiciones físicas de las instalaciones, higiene, ventilación, iluminación natural y artificial, sanitario y lavabo, suministro de agua para saneamiento sanitario, disposición de agua para el aseo personal, planchas para dormir, puertas y ventanas adecuadas para prevenir suicidios, circuito cerrado de video grabación, alimentación, entre otras. Es decir, los lugares de detención como es el caso de los separos preventivos municipales, deben contar con el equipamiento necesario para garantizar a las personas privadas de su libertad una estancia digna y segura, aun cuando su permanencia no exceda de treinta y seis horas.

Igualmente deben contar con mecanismos y procedimientos expeditos para la puesta a disposición inmediata ante el juez comunitario para que éste lleve a cabo el procedimiento correspondiente y en su caso, imponga la sanción respectiva. Asimismo, deben contar con el personal de seguridad necesario, personal médico y con los insumos (materiales y medicamentos) indispensables para atender situaciones de urgencia y brindar la atención médica inmediata que requieran las personas que se encuentran bajo su resguardo, asimismo deben contar con el personal de seguridad y administrativo necesario (psicología, de trabajo social, jurídico y de prevención del delito) que cumplan con perfiles profesionales correspondientes, de conformidad con las disposiciones legales, mecanismos y procedimientos vigentes, para que se garantice la seguridad y respeto a los derechos humanos de las personas privadas de su libertad. Lo anterior, a efecto de garantizar que ninguna persona detenida pierda la vida al interior de los separos preventivos, sea torturado o tratada cruel e inhumanamente por los elementos policiacos o por otros servidores públicos, o que sea agredida por otros detenidos.

Lo anterior a efecto de garantizar que ninguna persona detenida, pierda la vida al interior de los separos preventivos, sea torturada o maltratada por los elementos policiacos, sea agredida por otros detenidos o por servidor público alguno.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, con fundamento en lo dispuesto en los

artículos 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 23 de la Constitución Política del Estado de Zacatecas y 8 fracciones XII, XIV y XVIII de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, a efecto de supervisar el respeto a los derechos humanos en los separos preventivos, de las personas que ahí se encuentren privadas de su libertad, en el periodo a informar, llevó a cabo la supervisión a los separos preventivos en los 58 municipios del Estado de Zacatecas, conforme a la Guía Nacional de Supervisión Penitenciaria que utiliza la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en los aspectos que garantiza la integridad física, psicológica y moral del interno y aspectos que garantizan una estancia digna, en los aspectos aplicables. Es decir, se analizaron las condiciones de infraestructura, personal y normatividad, entre otros aspectos, como a continuación se detalla:

RESUMEN OBSERVACIONES DE LOS SEPAROS PREVENTIVOS 2021

No.	Rubro revisado	Valoración	Número de municipios	Porcentaje
1	Capacidad para albergar mujeres	Existente	27	46.56%
		Inexistente	31	53.44%
2	Capacidad para albergar menores de edad	Existente	7	87.93%
		Inexistente	51	12.07%
3	Capacidad para albergar hombres	Existente	57	98%
		Inexistente	1	1.73%
4	Condiciones físicas de las instalaciones	Buena	29	50%
		Regular	16	27.58%
		Mala	13	22.42%
5	Higiene	Buena	30	51.72%
		Regular	12	20.70%
		Mala	16	27.58%
6	Ventilación	Buena	44	75.86%
		Regular	9	15.52%
		Mala	5	8.62%
7	Iluminación	Buena	36	62.06%
		Regular	12	20.70%
		Mala	10	17.24%
8	Taza sanitaria al interior de la celda	Existente	50	86.21%
		Inexistente	8	13.79%

No.	Rubro revisado	Valoración	Número de municipios	Porcentaje
9	Lavabo al interior de la celda	Existente	6	10.36%
		Inexistente	52	89.64%
10	Privacidad en el uso del servicio sanitario	Existente	39	67.24%
		Inexistente	19	32.76%
11	Suministro de agua para saneamiento sanitario	Existente	16	27.58%
		Inexistente	42	72.42%
12	Planchas para dormir	Existente	48	82.75%
		Inexistente	10	17.25%
13	Puertas adecuadas para prevenir suicidios	Existente	18	31.03%
		Inexistente	40	68.97%
14	Ventanas adecuadas para prevenir suicidios	Existente	8	13.79%
		Inexistente	50	86.21%
15	Circuito cerrado de videograbación	Cuenta	25	43.1%
		No cuenta	33	56.9%
16	Alimentación	Existente	13	22.42%
		Inexistente	45	77.58%
17	Área médica	Existente	4	6.89%
		Inexistente	54	93.11%
18	Área psicológica	Existente	3	5.17%
		Inexistente	55	94.83%
19	Área de trabajo social	Existente	4	6.89%
		Inexistente	54	93.11%
20	Área de prevención del delito	Existente	7	12.06%
		Inexistente	51	87.94%
21	Área jurídica	Existente	7	12.06%
		Inexistente	51	87.94%
22	Área para el Juez Comunitario	Existente	36	62.06%
		Inexistente	22	37.94%

No.	Rubro revisado	Valoración	Número de municipios	Porcentaje
23	Personal médico	Existente	7	12.06%
		Inexistente	51	87.94%
24	Personal en psicología	Existente	3	5.17%
		Inexistente	55	94.83%
25	Personal en trabajo social	Existente	4	6.89%
		Inexistente	54	93.11%
26	Personal en prevención del delito	Existente	11	18.96%
		Inexistente	47	81.04%
27	Personal jurídico	Existente	7	12.06%
		Inexistente	51	87.94%
28	Bando de Policía y Buen Gobierno	Existente	44	75.86%
		Inexistente	14	24.14%
29	Reglamento de separos preventivos	Existente	14	24.14%
		Inexistente	44	75.86%
30	Manual y protocolos policiacos de actuación	Existente	28	48.27%
		Inexistente	30	51.73%
31	Condiciones del Libro de Registro de Personas Detenidas	Existente	43	74.14%
		Inexistente	15	25.86%
32	Procedimiento para remitir quejas a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas	Existente	17	29.31%
		Inexistente	41	70.69%
33	Jueces Comunitarios	Existente	52	89.66%
		Inexistente	6	10.34%
34	Medidas prevención contagios COVID-19	Existente	7	12.07%
		Insuficiente	14	24.14%
		Inexistente	37	63.79%

Fuente: Sistema Penitenciario de la CDHEZ.
Nota: Revisión realizada durante los meses de agosto a noviembre de 2021.

IV.1.4. Número de policías preventivos en el Estado de Zacatecas en el año 2021

NÚMERO DE POLICÍAS PREVENTIVOS EN EL ESTADO DE ZACATECAS

No.	Municipio	Número de habitantes	Policías por Municipio			Número de Policías que debe tener	Policías Faltantes	Porcentaje de policías faltantes
			Total	Hombres	Mujeres			
1	Apozol	6,260	13	10	3	17.9	4.9	27.39%
2	Apulco	4,942	0	0	0	14.13	14.13	100.00%
3	Atolinga	2,277	2	2	0	6.51	4.51	69.03%
4	Benito Juárez Florencia	4,493	3	3	0	12.85	9.85	76.65%
5	Calera de Víctor Rosales	45,759	17	12	5	130.87	113.87	87.01%
6	Cañitas de Felipe Pescador	8,255	5	5	0	23.61	18.61	78.82%
7	Chalchihuites	10,086	8	7	1	28.85	20.85	72.27%
8	Concepción del Oro	12,115	25	25	0	34.65	9.65	27.85%
9	Cuauhtémoc	13,466	4	4	0	38.51	34.51	89.61%
10	El Plateado de Joaquín Amaro	1,579	2	2	0	4.52	2.52	55.71%
11	El Salvador	2,509	0	0	0	7.18	7.18	100.00%
12	Fresnillo de González Echeverría	240,532	211	172	39	687.92	476.92	69.33%
13	Genaro Codina	8,168	10	9	1	23.36	13.36	57.19%
14	General Enrique Estrada	6,644	9	7	2	19	10	52.64%
15	General Francisco R. Murguía	20,191	10	10	0	57.75	47.75	82.68%
16	General Pánfilo Natera	23,526	13	11	2	67.28	54.28	80.68%
17	Guadalupe	211,740	204	127	77	605.58	401.58	66.31%
18	Huanusco	4,547	6	6	0	13	7	53.86%
19	Jalpa	25,296	20	17	3	72.35	52.35	72.36%
20	Jerez de García Salinas	59,910	46	26	20	171.34	125.34	73.15%
21	Jiménez del Teúl	4,465	6	5	1	12.77	6.77	53.01%
22	Juan Aldama	19,749	4	2	2	56.48	52.48	92.92%

No.	Municipio	Número de habitantes	Policías por Municipio			Número de Policías que debe tener	Policías Faltantes	Porcentaje de policías faltantes
			Total	Hombres	Mujeres			
23	Juchipila	12,251	16	14	2	35.04	19.04	54.34%
24	Loreto	53,709	0	0	0	153.61	153.61	100.00%
25	Luis Moya	13,184	14	14	0	37.71	23.71	62.87%
26	Mazapil	17,774	17	13	4	50.83	33.83	66.56%
27	Melchor Ocampo	2,736	4	4	0	7.82	3.82	48.88%
28	Mezquital del Oro	2,451	6	5	1	7.01	1.01	14.41%
29	Miguel Auza	23,713	22	17	5	67.82	45.82	67.56%
30	Momax	2,446	2	2	0	7	5	71..41%
31	Monte Escobedo	8,683	0	0	0	24.83	24.83	100.00%
32	Morelos	13,207	15	14	1	37.77	22.77	60.29%
33	Moyahua de Estada	4,530	10	8	2	12.96	2.96	22.81%
34	Nochistlán de Mejía	27,945	40	34	6	79.92	39.92	49.95%
35	Noria de Ángeles	16,284	7	6	1	46.57	39.57	84.97%
36	Ojocaliente	44,144	20	19	1	126.25	106.25	84.16%
37	Pánuco	17,577	8	8	0	50.27	42.27	84.09%
38	Pinos	72,241	31	25	6	206.61	175.61	85.00%
39	Río Grande	64,535	38	28	10	184.57	146.57	79.41%
40	Saín Alto	21,844	11	8	3	62.47	51.47	82.39%
41	Santa María de la Paz	2,767	6	6	0	7.91	1.91	24.18%
42	Sombrerete	63,665	40	30	10	182.08	142.08	78.03%
43	Susticacán	1,365	3	3	0	3.9	0.9	23.15%
44	Tabasco	16,588	7	5	2	47.44	40.44	85.25%
45	Tepechitlán	8,321	10	9	1	23.8	13.8	57.98%
46	Tepetongo	6,490	7	4	3	18.56	11.56	62.29%
47	Teúl de González Ortega	5,356	10	8	2	15.32	5.32	34.72%
48	Tlaltenango de Sánchez Román	27,302	44	38	6	78.08	34.08	43.65%
49	Trancoso	20,455	18	12	6	58.5	40.5	69.23%
50	Trinidad García de la Cadena	3,362	5	4	1	9.62	4.62	48.00%
51	Valparaíso	32,461	38	28	10	92.84	54.84	59.07%

No.	Municipio	Número de habitantes	Policías por Municipio			Número de Policías que debe tener	Policías Faltantes	Porcentaje de policías faltantes
			Total	Hombres	Mujeres			
52	Vetagrande	10,276	11	11	0	29.39	18.39	62.57%
53	Villa de Cos	34,623	18	13	5	99.02	81.02	81.82%
54	Villa García	19,525	25	19	6	55.84	30.84	55.23%
55	Villa González Ortega	13,208	8	7	1	37.77	29.77	78.82%
56	Villa Hidalgo	19,446	2	2	0	55.62	53.62	96.40%
57	Villanueva	31,558	42	36	6	90.26	48.26	53.47%
58	Zacatecas	149,607	175	99	76	427.88	252.88	59.10%
Total		1,622,138	1,348	1,015	333	4,639	3,291	71%

Fuente: Sistema Penitenciario de la CDHEZ.
Nota: Revisiones efectuadas durante los meses de agosto a noviembre de 2021.

IV.1.5. Acompañamiento a familiares de víctimas de personas desaparecidas

Especial mención merece el tema de desaparición de personas en el estado, grave problemática que afecta el derecho a la vida, derecho a la integridad, derecho a la libertad y a la seguridad personal, el derecho a no ser sometido a torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, y el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica y dignidad de las personas desaparecidas.

En el segundo semestre del año 2021, el personal de la CDHEZ dio acompañamiento a víctimas de personas desaparecidas en las denominadas "Acciones de Búsqueda", realizadas por la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares y la Comisión Local de Búsqueda; en los municipios de: Guadalupe, Río Grande, Nochistlán, Villa de Cos, Jerez de García Salinas, Tepetongo, Villanueva, Calera, Monte Escobedo, Zacatecas y Vetagrande como se muestra a continuación.

Acompañamiento a familiares de víctimas de personas desaparecidas en el Segundo Semestre del año 2021

No.	Lugar	Fecha
1	Comunidad La Escondida, Zacatecas, Zacatecas	1 de julio de 2021
2	Jerez de García Salinas, Zacatecas	9 de julio de 2021
3	Comunidad Chupaderos, Villa de Cos, Zacatecas	5 de agosto de 2021
4	Comunidad Juanchorey, Tepetongo, Zacatecas	11 de agosto de 2021
5	Comunidad Juanchorey, Tepetongo, Zacatecas	19 de agosto de 2021

No.	Lugar	Fecha
6	Comunidad Martínez Domínguez, Guadalupe, Zacatecas,	21 de septiembre de 2021
7	Comunidad de Delicias, Nochistlán de Mejía, Zacatecas	23 de septiembre de 2021
8	Relleno Sanitario Municipal de Río Grande, Zacatecas	30 de septiembre de 2021
9	Monte Escobedo, Zacatecas	5 de octubre de 2021
10	Comunidad Toribio, Calera, Zacatecas	13 de octubre de 2021
11	Comunidad de Zapoqui, Villanueva, Zacatecas	18 de octubre de 2021
12	Segunda Sección de la Colonia Díaz Ordaz, Zacatecas, Zacatecas	16 de diciembre de 2021
13	Tiro de Mina, Vetagrande, Zacatecas	17 de diciembre de 2021
14	Tiro de Mina Lucía II, Cerro del Grillo, Zacatecas, Zacatecas	17 de diciembre de 2021

Fuente: Sistema Penitenciario de la CDHEZ.
Los datos comprenden información del 1 de julio al 31 de diciembre de 2021.

IV.1.6. Registro de Fosas Clandestinas en el Estado

El fenómeno de la desaparición de personas está estrechamente vinculado al hallazgo de fosas clandestinas, éstas son lugares en los cuales se inhuman cuerpos o restos humanos con el propósito de ocultar destruir evidencia.

De acuerdo a la información de la Comisión Nacional de búsqueda de Personas, la Secretaría de Gobernación del 2006 a octubre de 2021 ha localizado 4 mil 806 fosas clandestinas con *8 mil 202 cuerpos exhumados en ellas en todo el país.*[7]

En virtud a lo anterior, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, lleva a cabo un registro de las fosas clandestinas publicadas en notas periodísticas en diversos medios de comunicación televisivos, impresos y digitales, en el año 2021 el registro de Fosas clandestinas es el siguiente:

[7] Encontrado en: www.adondevanlosdesaparecidos.org específicamente en: "México rebasa las 4 mil fosas clandestinas, 40% se encontraron en este sexenio", el 30 de diciembre de 2021 con referencia electrónica https://adondevanlosdesaparecidos.org/2021/10/08/mexico-rebasa-las-4-mil-fosas-clandestinas-40-se-encontraron-en-este-sexenio/ el sitio es de investigación y memoria sobre las lógicas de la desaparición en México.

FOSAS CLANDESTINAS 2021

Fecha	Lugar	Número de fosas	Número de Restos	Hombre	Mujer	Observaciones
21 de enero de 2021	Chupaderos, Villa de Cos	3	8			En una de las fosas, se localizaron nueve restos óseos; en otra ocho y en una tercera, un cadáver envuelto y un cráneo. Sumadas todas las osamentas, y de acuerdo a los trabajos realizados por arqueólogos forenses, se determinó que los restos corresponden a ocho personas.
12 de febrero de 2021	Chaparrosa, Villa de Cos	1				Fueron encontrados restos humanos junto a un narcomensaje. Hasta el momento, se desconoce si losrestos corresponde a una o más víctimas.
3 de marzo de 2021**	En una entrevista realizada por diversos medios de comunicación, Everardo Ramírez Aguayo, comisionado estatal de Búsqueda de Personas informó que las comisiones local y nacional de búsqueda localizaron las primeras fosas de 2021 en las acciones que realizaron en conjunto al cierre de febrero, cuando encontraron dos inhumaciones clandestinas, los restos encontrados fueron de cuatro cuerpos, los de tres hombres y de una mujer, en el municipio de Villa de Cos					
14 de septiembre de 2021	Machines, Zacatecas	1	10			Tras una denuncia ciudadana, autoridades aseguraron un inmueble donde encontraron los cuerpos sin vida de 10 personas; se presume que un grupo de la delincuencia usaba como casa de seguridad el sitio, ubicado en Machines, cerca de una propiedad del ex gobernador Miguel Alonso Reyes.
Total		7	22	3	1	

Fuente: Departamento Editorial y Publicaciones de la Dirección de Comunicación Social.
*La fecha que aparece en la tabla es la fecha en que se publicaron las notas periodísticas del hallazgo de la fosa.
*Algunas notas no precisan el número de cuerpos encontrados ni a qué sexo pertenecen, por ende no se tienen los datos completos del número de cuerpos encontrados.
**Fecha en que se publicó la entrevista.

IV.1.7. Supervisiones a Instituciones públicas y privadas

IV.1.7.1. Supervisiones a casas institucionalizadas para personas adultos mayores

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas efectuó 19 revisiones a casas institucionalizadas para personas adultas mayores, en los meses de septiembre y octubre del año 2021, se supervisó: capacidad instalada, población, condiciones de infraestructura, servicios, normatividad y alimentación.

No.	Institución	Fecha de la revisión	Municipio	Capacidad instalada	Mujeres atendidas	Hombres atendidos	Total	Mujeres con discapacidad	Hombres con Discapacidad	Total	Modalidad
1	Asilo de Ancianos San Francisco de Asís	27 de septiembre de 2021	Juchipila, Zacatecas	20	14	3	17	14	3	17	Residencial
2	Asilo de Ancianos Club de Leones	27 de septiembre de 2021	Jalpa, Zacatecas	22	10	6	16	10	6	16	Residencial
3	Casa de Día: Maximiano Camarillo Neri	5 de octubre de 2021	Loreto, Zacatecas	0	0	0	0	0	0	0	Casa de día (Cerrada por Contingencia Sanitaria)
4	Casa de Descanso Amor por Chalchihuites	30 de septiembre de 2021	Chalchihuites, Zacatecas	20	4	8	12	0	1	1	Residencial
5	Casa de Descanso Misión México AC BETSAN	28 de septiembre de 2021	Villa González Ortega (Estancia de Ánimas), Zacatecas	24	10	0	10	1	0	1	Residencial
6	Casa de la Tercera Edad	12 de octubre de 2021	Concepción del Oro, Zacatecas	0	0	0	0	0	0	0	Casa de día (Cerrada por Contingencia Sanitaria)
7	Casa Hogar de la Tercera Edad	17 de septiembre de 2021	Guadalupe, Zacatecas	40	22	16	38	22	16	38	Residencial
8	Casa Hogar El Abuelo	12 de octubre de 2021	Juan Aldama, Zacatecas	9	1	6	7	1	6	7	Residencial y Casa de Día
9	Casa Hogar Santa Elena	12 de octubre de 2021	Río Grande, Zacatecas	45	6	3	9	6	3	9	Residencial
10	Casa Asilo San Mateo Correa Magallanes	26 de octubre de 2021	Tepechitlán, Zacatecas	24	7	8	15	7	8	15	Residencial

No.	Institución	Fecha de la revisión	Municipio	Capacidad instalada	Mujeres atendidas	Hombres atendidos	Total	Mujeres con discapacidad	Hombres con Discapacidad	Total	Modalidad
11	Casa del Abuelo San Judas Tadeo	8 de octubre de 2021	Villanueva, Zacatecas	10	4	4	8	2	0	2	Residencial y Casa de Día
12	Asilo de Ancianos San Francisco	27 de octubre de 2021	Tlaltenango, Zacatecas	16	9	7	16	3	2	5	Residencial y Casa de Día
13	Asilo Guadalupano A.C	26 de octubrede 2021	Florencia de Benito Juárez, Zacatecas	18	7	9	16	7	9	16	Residencial
14	Casa Hogar Felipe de Jesús A.C.	26 de octubre de 2021	Teúl de González Ortega, Zacatecas	22	7	0	7	5	0	5	Residencial
15	Casa Hogar de Ancianos	14 de septiembre de 2021	Nochistlán, Zacatecas	13	3	2	5	3	1	4	Residencial
16	Casa Hogar Mi Esperanza	7 de octubre de 2021	Monte Escobedo, Zacatecas	12	4	5	9	4	5	9	Residencial
17	Mi nuevo Hogar	24 de septiembre de 2021	Villa de Cos, Zacatecas	10	0	0	0	0	0	0	Residencial y Casa de Día (cerrada por Contingencia Sanitaria)
18	Asilo de Ancianos Divina Providencia	20 de septiembre de 2021	Guadalupe, Zacatecas	47	23	15	38	23	15	38	Residencial
19	Casa del Abuelo	17 de septiembre de 2021	Zacatecas, Zacatecas	37	21	10	31	21	10	31	Casa de día

Fuente: Unidad de Apoyo a las Víctimas de la CDHEZ.
Nota: Los totales de mujeres y hombres atendidos, son cifras proporcionadas al momento de las revisiones llevada a cabo por la CDHEZ.

IV.1.7.2. Supervisiones a casas institucionalizadas para Niños, Niñas y Adolescentes

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas efectuó 4 revisiones a casas institucionalizadas para niñas, niños y adolescentes; en los meses de julio, septiembre y noviembre de 2021; se supervisó: capacidad instalada, población, condiciones de infraestructura, servicios, normatividad y alimentación; principalmente.

No.	Institución	Fecha de la revisión	Municipio	Capacidad instalada	Mujeres atendidas	Hombres atendidos	Total	Mujeres con discapacidad	Hombres con Discapacidad	Total
1	Villa Infantil Sagrado Corazón de Jesús AC	18 de octubre de 2021	Fresnillo, Zacatecas	50	26	10	36	1	1	2
2	Casa Cuna Plácido Domingo	7 de julio de 2021	Guadalupe, Zacatecas	45	26	23	49	1	2	3
3	Casa Hogar Amor y Esperanza	17 de septiembre de 2021	Zacatecas, Zacatecas	11	3	4	7	0	0	0
4	Casa Hogar para Jóvenes de Zacatecas	11 de noviembre de 2021	Guadalupe, Zacatecas	54	16	14	30	4	3	7

Fuente: Unidad de Apoyo a las Víctimas de la CDHEZ.
Nota: Los totales de mujeres y hombres atendidos, son cifras proporcionadas al momento de las revisiones llevada a cabo por la CDHEZ.

IV.1.7.3. Supervisiones a instituciones de atención a mujeres víctimas de violencia

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas realizó 4 revisiones a instituciones de atención a mujeres víctimas de violencia, en los meses de septiembre y octubre de 2021, se supervisó: capacidad instalada, población, y condiciones de infraestructura, servicios, normatividad, alimentación, entre otros.

No.	Institución	Fecha de la revisión	Municipio	Mujeres albergadas en el año	Mujeres albergadas al momento de la revisión	Mujeres con discapacidad albergadas en el año	Mujeres atendidas en el año	Mujeres atendidas en el último mes	Niños atendidos en el año	Total, de personas atendidas en el año	Servicios que ofrece
1	Casa de Medio Camino del Centro de Justicia para Mujeres	10 de septiembre de 2021	Zacatecas, Zacatecas	0	0	0	5,218 (154 adolescentes y 41mujeres con alguna discapacidad)	475	0	5,218	Alimentación Atención a la Salud Capacitación Educación Vestido y calzado Asesoría legal Becas Bolsa de trabajo Atención psicológica Ludoteca

No.	Institución	Fecha de la revisión	Municipio	Mujeres albergadas en el año	Mujeres albergadas al momento de la revisión	Mujeres con discapacidad albergadas en el año	Mujeres atendidas en el año	Mujeres atendidas en el último mes	Niños atendidos en el año	Total, de personas atendidas en el año	Servicios que ofrece
2	Centro de Atención contra la Violencia Intrafamiliar de Zacatecas	21de septiembre de 2021	Zacatecas, Zacatecas	74	3	3	697 (651 mujeres adultas, 32 mujeres adolescentes y 14 niñas)	61	3	700	Albergue Atención a la salud Capacitación Educación Vestido y calzado Asesoría legal Atención Psicológica Ludoteca
3	Casa Mujer Bicentenario	13 de septiembre de 2021	Guadalupe, Zacatecas	0	0	0	285 mujeres adultas	40	0	285	Atención a la salud Capacitación Educación Asesoría legal Trabajo Social Ludoteca Talleres
4	Centro Estatal de Prevención a la Violencia Familiar y de Género	22 de octubre de 2021	Zacatecas, Zacatecas	0	0	0	9,123 mujeres adolescentes y 40 mujeres adultas	1,212	0	9,123	Atención a la salud Capacitación Educación Atención psicológica

Fuente: Unidad de Apoyo a las Víctimas de la CDHEZ.
Nota: Los totales de mujeres y hombres atendidos, son cifras proporcionadas al momento de las revisiones llevada a cabo por la CDHEZ.

IV.1.7.4. Supervisión a Centros de Tratamiento y Rehabilitación de Adicciones en el Estado

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas efectuó 21 revisiones a Centros de Rehabilitación de Alcoholismo y Drogadicción en los meses de agosto, septiembre y octubre de 2021, se supervisó: capacidad instalada, población, y condiciones de infraestructura, servicios, normatividad y alimentación, principalmente.

No.	Institución	Fecha de la revisión	Municipio	Capacidad instalada	Mujeres atendidas	Hombres atendidos	Rango de edad	Total	Norma 028	Modalidad
1	Misiones y Albergues Cristianos Unidos AC	9 de agosto de 2021	Guadalupe, Zacatecas	28	0	28	14 a 18 años	28	Sí	Residencial
2	Voluntad y Acción AC	10 de septiembre de 2021	Santa Mónica, Guadalupe	33	0	33	18 a 59 años	33	Sí	Residencial
3	Misiones y Albergues Cristianos Unidos en Cristo AC Mujeres	10 de septiembre de 2021	Guadalupe, Zacatecas	30	27	0	12 a 20 años	27	Sí	Residencial
4	Casas y Albergues de Rehabilitación Agua Viva, Mujeres	13 de septiembre de 2021	Guadalupe, Zacatecas	35	32	0	13 años en adelante	32	Sí	Residencial
5	Casas y Albergues de Rehabilitación Agua Viva, Hombres	13 de septiembre de 2021	Guadalupe, Zacatecas	80	0	74	16 años en adelante	74	Sí	Residencial
6	Centro de Rehabilitación para Enfermos de Alcoholismo y Drogadicción AC (CRREAD)	14 de septiembre de 2021	Nochistlán de Mejía, Zacatecas	79	0	74	18 a 60 años	74	Sí	Residencial
7	Grupo Real de Zacatecas	20 de septiembre de 2021	Zacatecas, Zacatecas	12	4	4	18 años en adelante	8	No	De puertas abiertas
8	Grupo Paso Doce	24 de septiembre de 2021	Calera, Zacatecas	30	0	17	18 a 59 años	17	Sí	Residencial
9	Centro de Rehabilitación para Enfermos de Alcoholismo y Drogadicción AC (CRREAD)	27 de septiembre de 2021	Jalpa, Zacatecas	120	0	70	18 a 59 años	70	Sí	Residencial
10	Centro de Atención de Adicciones de Zacatecas	1 de octubre de 2021	Jerez, Zacatecas	16	0	6	18 a 60 años	6	Sí	Residencial

No.	Institución	Fecha de la revisión	Municipio	Capacidad instalada	Mujeres atendidas	Hombres atendidos	Rango de edad	Total	Norma 028	Modalidad
11	Centro de Solidaridad Intensiva de Alcoholismo y Drogadicción	1 de octubre de 2021	Jerez, Zacatecas	50	0	30	18 años en adelante	30	No	Residencial
12	Centro de Recuperación y Rehabilitación para Enfermos de Alcoholismo y Drogadicción AC (CRREAD)	1 de octubre de 2021	Jerez, Zacatecas	42	0	36	18 a 59 años	36	Sí	Residencial
13	Mi Esperanza AC	1 de octubre de 2021	Jerez, Zacatecas	22	0	22	18 años en adelante	22	No	Residencial
14	Centro de Atención y Recuperación de Adicciones Emperadores Ojocaliente AC	5 de octubre de 2021	Ojocaliente, Zacatecas	36	0	24	18 a 59 años	24	Sí	Residencial
15	Centro de Rehabilitación para Enfermos de Alcoholismo y Drogadicción AC (CRREAD)	5 de octubre de 2021	Loreto, Zacatecas	22	0	20	18 a 59 años	20	Sí	Residencial
16	Casas y Albergues de Rehabilitación Agua Viva	11 de octubre de 2021	Juan Aldama, Zacatecas	12	0	9	18 años en adelante	9	Sí	Residencial
17	Alcohólicos y Drogadictos en recuperación AC (ADER)	18 de octubre de 2021	Fresnillo, Zacatecas	35	0	30	18 a 65 años	30	Sí	Residencial
18	Centro de Orientación Agua Viva AC	18 de octubre de 2021	Fresnillo, Zacatecas	28	0	15	18 años en adelante	15	Sí	Residencial
19	Centro de Rehabilitación para Enfermos de Alcoholismo y Drogadicción AC (CRREAD)	18 de octubre de 2021	Fresnillo, Zacatecas	15	0	13	18 a 60 años	13	Sí	Residencial

No.	Institución	Fecha de la revisión	Municipio	Capacidad instalada	Mujeres atendidas	Hombres atendidos	Rango de edad	Total	Norma 028	Modalidad
20	Centro de Rehabilitación KOAN AC	22 de octubre de 2021	Trancoso, Zacatecas	30	2	20	18 años en adelante	22	Sí	Residencial
21	Centro de Rehabilitación para Enfermos de Alcoholismo y Drogadicción AC (CRREAD)	27 de octubre de 2021	Tlaltenango, Zacatecas	70	0	23	18 a 59 años	23	Sí	Residencial

Fuente: Unidad de Apoyo a las Víctimas de la CDHEZ.
Nota: Los totales de mujeres y hombres atendidos, son cifras proporcionadas al momento de las revisiones llevada a cabo por la CDHEZ.

IV.1.7.5. Supervisión a la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas efectuó 15 revisiones a estaciones migratorias del Instituto Nacional de Migración (INM) y los espacios habilitados como albergues en el periodo del 9 de marzo al 19 de noviembre de 2021, se supervisó: la infraestructura, normatividad y servicios.

SUPERVISIONES DE LA ESTACIÓN MIGRATORIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN

No.	Institución	Fecha de la Supervisión	Ubicación	Observaciones	Actividades	Personas atendidas
1	Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración	09 de marzo de 2021	Secretaría de Salubridad y Asistencia #20, Colonia Parque Industrial, Guadalupe, Zacatecas.	Se encontraron instalaciones en buenas condiciones; observando que, las personas aseguradas reciben alimentos 3 veces al día y cuentan con acceso al agua potable. Se encontraban albergadas 11 personas.	Se llevó a cabo la revisión de la infraestructura, normatividad y servicios.	11
2	Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración	15 de marzo de 2021	Secretaría de Salubridad y Asistencia #20, Colonia Parque Industrial, Guadalupe, Zacatecas.	Se encontraron instalaciones en buenas condiciones; observando que, las personas aseguradas reciben alimentos 3 veces al día y cuentan con acceso al agua potable. Se encontraban albergadas 31 personas.	Se llevó a cabo la revisión de la infraestructura, normatividad y servicios.	31

No.	Institución	Fecha de la Supervisión	Ubicación	Observaciones	Actividades	Personas atendidas
3	Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración	12 de abril de 2021	Secretaría de Salubridad y Asistencia #20, Colonia Parque Industrial, Guadalupe, Zacatecas.	Se encontraron instalaciones en buenas condiciones; observando que, las personas aseguradas reciben alimentos 3 veces al día y cuentan con acceso al agua potable. Se encontraban albergadas 37 personas.	Se llevó a cabo la revisión de la infraestructura, normatividad y servicios.	37
4	Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración	28 de mayo de 2021	Secretaría de Salubridad y Asistencia #20, Colonia Parque Industrial, Guadalupe, Zacatecas.	Se encontraron instalaciones en buenas condiciones; observando que, las personas aseguradas reciben alimentos 3 veces al día y cuentan con acceso al agua potable. Se encontraban albergadas 3 personas.	Se llevó a cabo la revisión de la infraestructura, normatividad y servicios.	3
5	Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración	11 de junio de 2021	Secretaría de Salubridad y Asistencia #20, Colonia Parque Industrial, Guadalupe, Zacatecas.	Se encontraron instalaciones en buenas condiciones; observando que, las personas aseguradas reciben alimentos 3 veces al día y cuentan con acceso al agua potable. Se encontraban albergadas 15 personas.	Se llevó a cabo la revisión de la infraestructura, normatividad y servicios.	15
6	Casa del Migrante	14 de junio de 2021	Cieneguillas, Zacatecas.	Se encontraron instalaciones en buenas condiciones; observando que, las personas aseguradas reciben alimentos 3 veces al día y cuentan con acceso al agua potable. Se encontraban albergadas 2 personas.	Se llevó a cabo la revisión de la infraestructura, normatividad y servicios.	2
7	Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración	12 de julio de 2021	Secretaría de Salubridad y Asistencia #20, Colonia Parque Industrial, Guadalupe, Zacatecas.	Se encontraron instalaciones en buenas condiciones; observando que, las personas aseguradas reciben alimentos 3 veces al día y cuentan con acceso al agua potable. Se encontraban albergadas 40 personas.	Se llevó a cabo la revisión de la infraestructura, normatividad y servicios.	40
8	Casa del Migrante	24 de septiembre de 2021	Cieneguillas, Zacatecas.	Se encontraron instalaciones en buenas condiciones; observando que, las personas aseguradas reciben alimentos 3 veces al día y cuentan con acceso al agua potable. Se encontraban albergadas 16 personas.	Se llevó a cabo la revisión de la infraestructura, normatividad y servicios.	16
9	Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración	28 de septiembre de 2021	Secretaría de Salubridad y Asistencia #20, Colonia Parque Industrial, Guadalupe, Zacatecas.	Se encontraron instalaciones en buenas condiciones; observando que, las personas aseguradas reciben alimentos 3 veces al día y cuentan con acceso al agua potable. Se encontraban albergadas 73 personas.	Se llevó a cabo la revisión de la infraestructura, normatividad y servicios.	73

No.	Institución	Fecha de la Supervisión	Ubicación	Observaciones	Actividades	Personas atendidas
10	Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración	14 de octubre de 2021	Secretaría de Salubridad y Asistencia #20, Colonia Parque Industrial, Guadalupe, Zacatecas.	Se encontraron instalaciones en buenas condiciones; observando que, las personas aseguradas reciben alimentos 3 veces al día y cuentan con acceso al agua potable. Se encontraban albergadas 56 personas.	Se llevó a cabo la revisión de la infraestructura, normatividad y servicios.	56
11	Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración	22 de octubre de 2021	Secretaría de Salubridad y Asistencia #20, Colonia Parque Industrial, Guadalupe, Zacatecas.	Se encontraron instalaciones en buenas condiciones; observando que, las personas aseguradas reciben alimentos 3 veces al día y cuentan con acceso al agua potable. Se encontraban albergadas 56 personas.	Se llevó a cabo la revisión de la infraestructura, normatividad y servicios.	56
12	Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración	09 de noviembre de 2021	Secretaría de Salubridad y Asistencia #20, Colonia Parque Industrial, Guadalupe, Zacatecas.	Se encontraron instalaciones en buenas condiciones; observando que, las personas aseguradas reciben alimentos 3 veces al día y cuentan con acceso al agua potable. Se encontraban albergadas 25 personas.	Se llevó a cabo la revisión de la infraestructura, normatividad y servicios.	25
13	Procuraduría de Protección a Niñas, Niños, Adolescentes y Familia.	11 de noviembre de 2021	Salón Chicomostoc, ubicado en las instalaciones de la Feria Nacional de Zacatecas.	Se encontraron instalaciones en regulares condiciones; observando que, las personas aseguradas reciben alimentos 3 veces al día y cuentan con acceso al agua potable. Se encontraban albergadas 9 personas.	Se llevó a cabo la revisión de la infraestructura, normatividad y servicios.	9
14	Procuraduría de Protección a Niñas, Niños, Adolescentes y Familia.	19 de noviembre de 2021	Salón Chicomoztoc, ubicado en las instalaciones de la Feria Nacional de Zacatecas.	Se encontraron instalaciones en regulares condiciones; observando que, las personas aseguradas reciben alimentos 3 veces al día y cuentan con acceso al agua potable. Se encontraban albergadas 21 personas.	Se llevó a cabo la revisión de la infraestructura, normatividad y servicios.	21
15	Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración	19 de noviembre de 2021	Secretaría de Salubridad y Asistencia #20, Colonia Parque Industrial, Guadalupe, Zacatecas.	Se encontraron instalaciones en buenas condiciones; observando que, las personas aseguradas reciben alimentos 3 veces al día y cuentan con acceso al agua potable. Se encontraban albergadas 36 personas.	Se llevó a cabo la revisión de la infraestructura, normatividad y servicios.	36

Fuente: Cuarta Visitaduría General

CONVENIOS

V. Convenios de Colaboración

Convenios de Colaboración del Segundo Semestre del Año 2021

No.	Institución o Instituciones	Fecha de Firma	Objetivo General del Convenio
1	H. Ayuntamiento del Municipio de Apozol, Zacatecas y la CDHEZ	15 de octubre de 2021	Establecer las bases de colaboración entre "las partes" en aquellos proyectos y programas que determinen llevar a cabo de manera conjunta, relacionados con la promoción, capacitación, difusión y formación en materia de derechos humanos, dirigidos a servidores públicos del Ayuntamiento del Municipio de Apozol, Zacatecas, en las áreas de seguridad pública, servidores públicos en general y sociedad en general, con la finalidad de proponer líneas de acción para la consolidación de la cultura de respeto, difusión, promoción, protección y defensa de los derechos humanos del Estado de Zacatecas.
2	H. Ayuntamiento del Municipio de Apulco, Zacatecas y la CDHEZ	15 de octubre de 2021	Establecer las bases de colaboración entre "las partes" en aquellos proyectos y programas que determinen llevar a cabo de manera conjunta, relacionados con la promoción, capacitación, difusión y formación en materia de derechos humanos, dirigidos a servidores públicos del Ayuntamiento del Municipio de Apulco , Zacatecas, en las áreas de seguridad pública, servidores públicos en general y sociedad en general, con la finalidad de proponer líneas de acción para la consolidación de la cultura de respeto, difusión, promoción, protección y defensa de los derechos humanos del Estado de Zacatecas.
3	H. Ayuntamiento del Municipio de Atolinga, Zacatecas y la CDHEZ	15 de octubre de 2021	Establecer las bases de colaboración entre "las partes" en aquellos proyectos y programas que determinen llevar a cabo de manera conjunta, relacionados con la promoción, capacitación, difusión y formación en materia de derechos humanos, dirigidos a servidores públicos del Ayuntamiento del Municipio de Atolinga, Zacatecas, en las áreas de seguridad pública, servidores públicos en general y sociedad en general, con la finalidad de proponer líneas de acción para la consolidación de la cultura de respeto, difusión, promoción, protección y defensa de los derechos humanos del Estado de Zacatecas.
4	H. Ayuntamiento del Municipio de Trinidad García de la Cadena, Zacatecas y la CDHEZ	15 de octubre de 2021	Establecer las bases de colaboración entre "las partes" en aquellos proyectos y programas que determinen llevar a cabo de manera conjunta, relacionados con la promoción, capacitación, difusión y formación en materia de derechos humanos, dirigidos a servidores públicos del Ayuntamiento del Municipio de Trinidad García de la Cadena, Zacatecas, en las áreas de seguridad pública, servidores públicos en general y sociedad en general, con la finalidad de proponer líneas de acción para la consolidación de la cultura de respeto, difusión, promoción, protección y defensa de los derechos humanos del Estado de Zacatecas.
5	H. Ayuntamiento del Municipio de Genaro Codina, Zacatecas y la CDHEZ	15 de octubre de 2021	Establecer las bases de colaboración entre "las partes" en aquellos proyectos y programas que determinen llevar a cabo de manera conjunta, relacionados con la promoción, capacitación, difusión y formación en materia de derechos humanos, dirigidos a servidores públicos del Ayuntamiento del Municipio de Genaro Codina, Zacatecas, en las áreas de seguridad pública, servidores públicos en general y sociedad en general, con la finalidad de proponer líneas de acción para la consolidación de la cultura de respeto, difusión, promoción, protección y defensa de los derechos humanos del Estado de Zacatecas.

No.	Institución o Instituciones	Fecha de Firma	Objetivo General del Convenio
6	H. Ayuntamiento del Municipio de Huanusco, Zacatecas y la CDHEZ	15 de octubre de 2021	Establecer las bases de colaboración entre "las partes" en aquellos proyectos y programas que determinen llevar a cabo de manera conjunta, relacionados con la promoción, capacitación, difusión y formación en materia de derechos humanos, dirigidos a servidores públicos del Ayuntamiento del Municipio de Huanusco, Zacatecas, en las áreas de seguridad pública, servidores públicos en general y sociedad en general, con la finalidad de proponer líneas de acción para la consolidación de la cultura de respeto, difusión, promoción, protección y defensa de los derechos humanos del Estado de Zacatecas.
7	H. Ayuntamiento del Municipio de Jalpa, Zacatecas y la CDHEZ	15 de octubre de 2021	Establecer las bases de colaboración entre "las partes" en aquellos proyectos y programas que determinen llevar a cabo de manera conjunta, relacionados con la promoción, capacitación, difusión y formación en materia de derechos humanos, dirigidos a servidores públicos del Ayuntamiento del Municipio de Jalpa, Zacatecas, en las áreas de seguridad pública, servidores públicos en general y sociedad en general, con la finalidad de proponer líneas de acción para la consolidación de la cultura de respeto, difusión, promoción, protección y defensa de los derechos humanos del Estado de Zacatecas.
8	H. Ayuntamiento del Municipio de Jerez de García Salinas, Zacatecas y la CDHEZ	15 de octubre de 2021	Establecer las bases de colaboración entre "las partes" en aquellos proyectos y programas que determinen llevar a cabo de manera conjunta, relacionados con la promoción, capacitación, difusión y formación en materia de derechos humanos, dirigidos a servidores públicos del Ayuntamiento del Municipio de Jerez de García Salinas, Zacatecas, en las áreas de seguridad pública, servidores públicos en general y sociedad en general, con la finalidad de proponer líneas de acción para la consolidación de la cultura de respeto, difusión, promoción, protección y defensa de los derechos humanos del Estado de Zacatecas.
9	H. Ayuntamiento del Municipio de Juan Aldama, Zacatecas y la CDHEZ	15 de octubre de 2021	Establecer las bases de colaboración entre "las partes" en aquellos proyectos y programas que determinen llevar a cabo de manera conjunta, relacionados con la promoción, capacitación, difusión y formación en materia de derechos humanos, dirigidos a servidores públicos del Ayuntamiento del Municipio de Juan Aldama, Zacatecas, en las áreas de seguridad pública, servidores públicos en general y sociedad en general, con la finalidad de proponer líneas de acción para la consolidación de la cultura de respeto, difusión, promoción, protección y defensa de los derechos humanos del Estado de Zacatecas.
10	H. Ayuntamiento del Municipio de Juchipila, Zacatecas y la CDHEZ	15 de octubre de 2021	Establecer las bases de colaboración entre "las partes" en aquellos proyectos y programas que determinen llevar a cabo de manera conjunta, relacionados con la promoción, capacitación, difusión y formación en materia de derechos humanos, dirigidos a servidores públicos del Ayuntamiento del Municipio de Juchipila, Zacatecas, en las áreas de seguridad pública, servidores públicos en general y sociedad en general, con la finalidad de proponer líneas de acción para la consolidación de la cultura de respeto, difusión, promoción, protección y defensa de los derechos humanos del Estado de Zacatecas.

No.	Institución o Instituciones	Fecha de Firma	Objetivo General del Convenio
11	H. Ayuntamiento del Municipio de Luis Moya, Zacatecas y la CDHEZ	15 de octubre de 2021	Establecer las bases de colaboración entre "las partes" en aquellos proyectos y programas que determinen llevar a cabo de manera conjunta, relacionados con la promoción, capacitación, difusión y formación en materia de derechos humanos, dirigidos a servidores públicos del Ayuntamiento del Municipio de Luis Moya, Zacatecas, en las áreas de seguridad pública, servidores públicos en general y sociedad en general, con la finalidad de proponer líneas de acción para la consolidación de la cultura de respeto, difusión, promoción, protección y defensa de los derechos humanos del Estado de Zacatecas.
12	H. Ayuntamiento del Municipio de Loreto, Zacatecas y la CDHEZ	15 de octubre de 2021	Establecer las bases de colaboración entre "las partes" en aquellos proyectos y programas que determinen llevar a cabo de manera conjunta, relacionados con la promoción, capacitación, difusión y formación en materia de derechos humanos, dirigidos a servidores públicos del Ayuntamiento del Municipio de Loreto, Zacatecas, en las áreas de seguridad pública, servidores públicos en general y sociedad en general, con la finalidad de proponer líneas de acción para la consolidación de la cultura de respeto, difusión, promoción, protección y defensa de los derechos humanos del Estado de Zacatecas.
13	H. Ayuntamiento del Municipio de General Francisco R. Murguía, Zacatecas y la CDHEZ	15 de octubre de 2021	Establecer las bases de colaboración entre "las partes" en aquellos proyectos y programas que determinen llevar a cabo de manera conjunta, relacionados con la promoción, capacitación, difusión y formación en materia de derechos humanos, dirigidos a servidores públicos del Ayuntamiento del Municipio de General Francisco R. Murguía, Zacatecas, en las áreas de seguridad pública, servidores públicos en general y sociedad en general, con la finalidad de proponer líneas de acción para la consolidación de la cultura de respeto, difusión, promoción, protección y defensa de los derechos humanos del Estado de Zacatecas.
14	H. Ayuntamiento del Municipio de Mezquital del Oro, Zacatecas y la CDHEZ	15 de octubre de 2021	Establecer las bases de colaboración entre "las partes" en aquellos proyectos y programas que determinen llevar a cabo de manera conjunta, relacionados con la promoción, capacitación, difusión y formación en materia de derechos humanos, dirigidos a servidores públicos del Ayuntamiento del Municipio de Mezquital del Oro, Zacatecas, en las áreas de seguridad pública, servidores públicos en general y sociedad en general, con la finalidad de proponer líneas de acción para la consolidación de la cultura de respeto, difusión, promoción, protección y defensa de los derechos humanos del Estado de Zacatecas.
15	H. Ayuntamiento del Municipio de Miguel Auza, Zacatecas y la CDHEZ	15 de octubre de 2021	Establecer las bases de colaboración entre "las partes" en aquellos proyectos y programas que determinen llevar a cabo de manera conjunta, relacionados con la promoción, capacitación, difusión y formación en materia de derechos humanos, dirigidos a servidores públicos del Ayuntamiento del Municipio de Miguel Auza, Zacatecas, en las áreas de seguridad pública, servidores públicos en general y sociedad en general, con la finalidad de proponer líneas de acción para la consolidación de la cultura de respeto, difusión, promoción, protección y defensa de los derechos humanos del Estado de Zacatecas.

No.	Institución o Instituciones	Fecha de Firma	Objetivo General del Convenio
16	H. Ayuntamiento del Municipio de Monte Escobedo, Zacatecas y la CDHEZ	15 de octubre de 2021	Establecer las bases de colaboración entre "las partes" en aquellos proyectos y programas que determinen llevar a cabo de manera conjunta, relacionados con la promoción, capacitación, difusión y formación en materia de derechos humanos, dirigidos a servidores públicos del Ayuntamiento del Municipio de Monte Escobedo, Zacatecas, en las áreas de seguridad pública, servidores públicos en general y sociedad en general, con la finalidad de proponer líneas de acción para la consolidación de la cultura de respeto, difusión, promoción, protección y defensa de los derechos humanos del Estado de Zacatecas.
17	H. Ayuntamiento del Municipio de Morelos, Zacatecas y la CDHEZ	15 de octubre de 2021	Establecer las bases de colaboración entre "las partes" en aquellos proyectos y programas que determinen llevar a cabo de manera conjunta, relacionados con la promoción, capacitación, difusión y formación en materia de derechos humanos, dirigidos a servidores públicos del Ayuntamiento del Municipio de Morelos, Zacatecas, en las áreas de seguridad pública, servidores públicos en general y sociedad en general, con la finalidad de proponer líneas de acción para la consolidación de la cultura de respeto, difusión, promoción, protección y defensa de los derechos humanos del Estado de Zacatecas.
18	H. Ayuntamiento del Municipio de Moyahua de Estrada, Zacatecas y la CDHEZ	15 de octubre de 2021	Establecer las bases de colaboración entre "las partes" en aquellos proyectos y programas que determinen llevar a cabo de manera conjunta, relacionados con la promoción, capacitación, difusión y formación en materia de derechos humanos, dirigidos a servidores públicos del Ayuntamiento del Municipio de Moyahua de Estrada, Zacatecas, en las áreas de seguridad pública, servidores públicos en general y sociedad en general, con la finalidad de proponer líneas de acción para la consolidación de la cultura de respeto, difusión, promoción, protección y defensa de los derechos humanos del Estado de Zacatecas.
19	H. Ayuntamiento del Municipio de Nochistlán de Mejía, Zacatecas y la CDHEZ	15 de octubre de 2021	Establecer las bases de colaboración entre "las partes" en aquellos proyectos y programas que determinen llevar a cabo de manera conjunta, relacionados con la promoción, capacitación, difusión y formación en materia de derechos humanos, dirigidos a servidores públicos del Ayuntamiento del Municipio de Nochistlán de Mejía, Zacatecas, en las áreas de seguridad pública, servidores públicos en general y sociedad en general, con la finalidad de proponer líneas de acción para la consolidación de la cultura de respeto, difusión, promoción, protección y defensa de los derechos humanos del Estado de Zacatecas.
20	H. Ayuntamiento del Municipio de Noria de Ángeles, Zacatecas y la CDHEZ	15 de octubre de 2021	Establecer las bases de colaboración entre "las partes" en aquellos proyectos y programas que determinen llevar a cabo de manera conjunta, relacionados con la promoción, capacitación, difusión y formación en materia de derechos humanos, dirigidos a servidores públicos del Ayuntamiento del Municipio de Noria de Ángeles, Zacatecas, en las áreas de seguridad pública, servidores públicos en general y sociedad en general, con la finalidad de proponer líneas de acción para la consolidación de la cultura de respeto, difusión, promoción, protección y defensa de los derechos humanos del Estado de Zacatecas.

No.	Institución o Instituciones	Fecha de Firma	Objetivo General del Convenio
21	H. Ayuntamiento del Municipio de Pinos, Zacatecas y la CDHEZ	15 de octubre de 2021	Establecer las bases de colaboración entre "las partes" en aquellos proyectos y programas que determinen llevar a cabo de manera conjunta, relacionados con la promoción, capacitación, difusión y formación en materia de derechos humanos, dirigidos a servidores públicos del Ayuntamiento del Municipio de Pinos, Zacatecas, en las áreas de seguridad pública, servidores públicos en general y sociedad en general, con la finalidad de proponer líneas de acción para la consolidación de la cultura de respeto, difusión, promoción, protección y defensa de los derechos humanos del Estado de Zacatecas.
22	H. Ayuntamiento del Municipio de Santa María de la Paz y la CDHEZ	15 de octubre de 2021	Establecer las bases de colaboración entre "las partes" en aquellos proyectos y programas que determinen llevar a cabo de manera conjunta, relacionados con la promoción, capacitación, difusión y formación en materia de derechos humanos, dirigidos a servidores públicos del Ayuntamiento del Municipio de Santa María de la Paz, Zacatecas, en las áreas de seguridad pública, servidores públicos en general y sociedad en general, con la finalidad de proponer líneas de acción para la consolidación de la cultura de respeto, difusión, promoción, protección y defensa de los derechos humanos del Estado de Zacatecas.
23	H. Ayuntamiento del Municipio de Saín Alto	15 de octubre de 2021	Establecer las bases de colaboración entre "las partes" en aquellos proyectos y programas que determinen llevar a cabo de manera conjunta, relacionados con la promoción, capacitación, difusión y formación en materia de derechos humanos, dirigidos a servidores públicos del Ayuntamiento del Municipio de Saín Alto, Zacatecas, en las áreas de seguridad pública, servidores públicos en general y sociedad en general, con la finalidad de proponer líneas de acción para la consolidación de la cultura de respeto, difusión, promoción, protección y defensa de los derechos humanos del Estado de Zacatecas.
24	H. Ayuntamiento del Municipio de Sombrerete	15 de octubre de 2021	Establecer las bases de colaboración entre "las partes" en aquellos proyectos y programas que determinen llevar a cabo de manera conjunta, relacionados con la promoción, capacitación, difusión y formación en materia de derechos humanos, dirigidos a servidores públicos del Ayuntamiento del Municipio de Sombrerete, Zacatecas, en las áreas de seguridad pública, servidores públicos en general y sociedad en general, con la finalidad de proponer líneas de acción para la consolidación de la cultura de respeto, difusión, promoción, protección y defensa de los derechos humanos del Estado de Zacatecas.
25	H. Ayuntamiento del Municipio de Susticacán, Zacatecas y la CDHEZ	15 de octubre de 2021	Establecer las bases de colaboración entre "las partes" en aquellos proyectos y programas que determinen llevar a cabo de manera conjunta, relacionados con la promoción, capacitación, difusión y formación en materia de derechos humanos, dirigidos a servidores públicos del Ayuntamiento del Municipio de Susticacán, Zacatecas, en las áreas de seguridad pública, servidores públicos en general y sociedad en general, con la finalidad de proponer líneas de acción para la consolidación de la cultura de respeto, difusión, promoción, protección y defensa de los derechos humanos del Estado de Zacatecas.

No.	Institución o Instituciones	Fecha de Firma	Objetivo General del Convenio
26	H. Ayuntamiento del Municipio de Tabasco, Zacatecas y la CDHEZ	15 de octubre de 2021	Establecer las bases de colaboración entre "las partes" en aquellos proyectos y programas que determinen llevar a cabo de manera conjunta, relacionados con la promoción, capacitación, difusión y formación en materia de derechos humanos, dirigidos a servidores públicos del Ayuntamiento del Municipio de Tabasco, Zacatecas, en las áreas de seguridad pública, servidores públicos en general y sociedad en general, con la finalidad de proponer líneas de acción para la consolidación de la cultura de respeto, difusión, promoción, protección y defensa de los derechos humanos del Estado de Zacatecas.
27	H. Ayuntamiento del Municipio de Tepechitlán, Zacatecas y la CDHEZ	15 de octubre de 2021	Establecer las bases de colaboración entre "las partes" en aquellos proyectos y programas que determinen llevar a cabo de manera conjunta, relacionados con la promoción, capacitación, difusión y formación en materia de derechos humanos, dirigidos a servidores públicos del Ayuntamiento del Municipio de Tepechitlán, Zacatecas, en las áreas de seguridad pública, servidores públicos en general y sociedad en general, con la finalidad de proponer líneas de acción para la consolidación de la cultura de respeto, difusión, promoción, protección y defensa de los derechos humanos del Estado de Zacatecas.
28	H. Ayuntamiento del Municipio de Tepetongo, Zacatecas y la CDHEZ	15 de octubre de 2021	Establecer las bases de colaboración entre "las partes" en aquellos proyectos y programas que determinen llevar a cabo de manera conjunta, relacionados con la promoción, capacitación, difusión y formación en materia de derechos humanos, dirigidos a servidores públicos del Ayuntamiento del Municipio de Tepetongo, Zacatecas, en las áreas de seguridad pública, servidores públicos en general y sociedad en general, con la finalidad de proponer líneas de acción para la consolidación de la cultura de respeto, difusión, promoción, protección y defensa de los derechos humanos del Estado de Zacatecas.
29	H. Ayuntamiento del Municipio de Teúl de González Ortega, Zacatecas y la CDHEZ	15 de octubre de 2021	Establecer las bases de colaboración entre "las partes" en aquellos proyectos y programas que determinen llevar a cabo de manera conjunta, relacionados con la promoción, capacitación, difusión y formación en materia de derechos humanos, dirigidos a servidores públicos del Ayuntamiento del Municipio de Teúl de Gonzáles Ortega, Zacatecas, en las áreas de seguridad pública, servidores públicos en general y sociedad en general, con la finalidad de proponer líneas de acción para la consolidación de la cultura de respeto, difusión, promoción, protección y defensa de los derechos humanos del Estado de Zacatecas.
30	H. Ayuntamiento del Municipio de Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas y la CDHEZ	15 de octubre de 2021	Establecer las bases de colaboración entre "las partes" en aquellos proyectos y programas que determinen llevar a cabo de manera conjunta, relacionados con la promoción, capacitación, difusión y formación en materia de derechos humanos, dirigidos a servidores públicos del Ayuntamiento del Municipio de Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas, en las áreas de seguridad pública, servidores públicos en general y sociedad en general, con la finalidad de proponer líneas de acción para la consolidación de la cultura de respeto, difusión, promoción, protección y defensa de los derechos humanos del Estado de Zacatecas.

No.	Institución o Instituciones	Fecha de Firma	Objetivo General del Convenio
31	H. Ayuntamiento del Municipio de Trancoso, Zacatecas y la CDHEZ	15 de octubre de 2021	Establecer las bases de colaboración entre "las partes" en aquellos proyectos y programas que determinen llevar a cabo de manera conjunta, relacionados con la promoción, capacitación, difusión y formación en materia de derechos humanos, dirigidos a servidores públicos del Ayuntamiento del Municipio de Trancoso, Zacatecas, en las áreas de seguridad pública, servidores públicos en general y sociedad en general, con la finalidad de proponer líneas de acción para la consolidación de la cultura de respeto, difusión, promoción, protección y defensa de los derechos humanos del Estado de Zacatecas.
32	H. Ayuntamiento del Municipio de Valparaíso, Zacatecas y la CDHEZ	15 de octubre de 2021	Establecer las bases de colaboración entre "las partes" en aquellos proyectos y programas que determinen llevar a cabo de manera conjunta, relacionados con la promoción, capacitación, difusión y formación en materia de derechos humanos, dirigidos a servidores públicos del Ayuntamiento del Municipio de Valparaíso, Zacatecas, en las áreas de seguridad pública, servidores públicos en general y sociedad en general, con la finalidad de proponer líneas de acción para la consolidación de la cultura de respeto, difusión, promoción, protección y defensa de los derechos humanos del Estado de Zacatecas.
33	H. Ayuntamiento del Municipio de Vetagrande, Zacatecas y la CDHEZ	15 de octubre de 2021	Establecer las bases de colaboración entre "las partes" en aquellos proyectos y programas que determinen llevar a cabo de manera conjunta, relacionados con la promoción, capacitación, difusión y formación en materia de derechos humanos, dirigidos a servidores públicos del Ayuntamiento del Municipio de Vetagrande, Zacatecas, en las áreas de seguridad pública, servidores públicos en general y sociedad en general, con la finalidad de proponer líneas de acción para la consolidación de la cultura de respeto, difusión, promoción, protección y defensa de los derechos humanos del Estado de Zacatecas.
34	H. Ayuntamiento del Municipio de Villanueva, Zacatecas y la CDHEZ	15 de octubre de 2021	Establecer las bases de colaboración entre "las partes" en aquellos proyectos y programas que determinen llevar a cabo de manera conjunta, relacionados con la promoción, capacitación, difusión y formación en materia de derechos humanos, dirigidos a servidores públicos del Ayuntamiento del Municipio de Villanueva, Zacatecas, en las áreas de seguridad pública, servidores públicos en general y sociedad en general, con la finalidad de proponer líneas de acción para la consolidación de la cultura de respeto, difusión, promoción, protección y defensa de los derechos humanos del Estado de Zacatecas.
35	H. Ayuntamiento del Municipio de Zacatecas, Zacatecas y la CDHEZ	15 de octubre de 2021	Establecer las bases de colaboración entre "las partes" en aquellos proyectos y programas que determinen llevar a cabo de manera conjunta, relacionados con la promoción, capacitación, difusión y formación en materia de derechos humanos, dirigidos a servidores públicos del Ayuntamiento del Municipio de Zacatecas, Zacatecas, en las áreas de seguridad pública, servidores públicos en general y sociedad en general, con la finalidad de proponer líneas de acción para la consolidación de la cultura de respeto, difusión, promoción, protección y defensa de los derechos humanos del Estado de Zacatecas.

No.	Institución o Instituciones	Fecha de Firma	Objetivo General del Convenio
36	Ayuntamiento del Municipio de Fresnillo, Zacatecas y la CDHEZ	16 de noviembre de 2021	Establecer las bases de colaboración entre "las partes" en aquellos proyectos y programas que determinen llevar a cabo de manera conjunta, relacionados con la promoción, capacitación, difusión y formación en materia de derechos humanos, dirigidos a servidores públicos del Ayuntamiento del Municipio de Fresnillo, Zacatecas, en las áreas de seguridad pública, servidores públicos en general y sociedad en general, con la finalidad de proponer líneas de acción para la consolidación de la cultura de respeto, difusión, promoción, protección y defensa de los derechos humanos del Estado de Zacatecas.
37	Ayuntamiento del Municipio de Río Grande, Zacatecas y la CDHEZ	30 de noviembre de 2021	Establecer las bases de colaboración entre "las partes" en aquellos proyectos y programas que determinen llevar a cabo de manera conjunta, relacionados con la promoción, capacitación, difusión y formación en materia de derechos humanos, dirigidos a servidores públicos del Ayuntamiento del Municipio de Río Grande, Zacatecas, en las áreas de seguridad pública, servidores públicos en general y sociedad en general, con la finalidad de proponer líneas de acción para la consolidación de la cultura de respeto, difusión, promoción, protección y defensa de los derechos humanos del Estado de Zacatecas.
38	H. Ayuntamiento del Municipio de Guadalupe, Zacatecas y la CDHEZ	9 de diciembre de 2021	Establecer las bases de colaboración entre "las partes" en aquellos proyectos y programas que determinen llevar a cabo de manera conjunta, relacionados con la promoción, capacitación, difusión y formación en materia de derechos humanos, dirigidos a servidores públicos del Ayuntamiento del Municipio de Guadalupe, Zacatecas, en las áreas de seguridad pública, servidores públicos en general y sociedad en general, con la finalidad de proponer líneas de acción para la consolidación de la cultura de respeto, difusión, promoción, protección y defensa de los derechos humanos del Estado de Zacatecas.
39	Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Zacatecas y la CDHEZ	13 de diciembre de 2021	Establecer las bases de colaboración entre "las partes" en aquellos proyectos que determinen llevar a cabo de manera conjunta, relacionados con la promoción, capacitación, difusión y formación en materia de derechos humanos, dirigidos a las servidoras públicas y servidores públicos del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Zacatecas, con la finalidad de proponer líneas de acción para la consolidación de la cultura del respeto, difusión, promoción, protección y defensa de los derechos humanos en el Estado de Zacatecas.

Fuente: Secretaría Ejecutiva
Los datos comprenden información del 1 de julio al 31 de diciembre de 2021.

GACETA OFICIAL

Órgano de Difusión Oficial de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas

WWW.CDHEZAC.ORG.MX